



SENADO DE LA NACIÓN ARGENTINA

**COMISIÓN DE ECONOMÍAS REGIONALES, ECONOMÍA
SOCIAL, MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA**

**LEGISLACIÓN SOBRE ECONOMÍA SOCIAL
DE ARGENTINA Y DE ALGUNOS PAÍSES EXTRANJEROS**

Versión a julio de 2015

INDICE DE LEGISLACION SOBRE ECONOMIA SOCIAL

Página

<u>INTRODUCCIÓN</u>	7

1. LEGISLACION NACIONAL

▪ Ley 19.331.....	7
▪ Ley 20.321.....	9
▪ Ley 20.337.....	16
▪ Ley 23.427.....	37
▪ Ley 25.782.....	43
▪ Ley 26.117.....	44
▪ Decreto 1305/06 Reglamentario de la Ley 26.117.....	48
▪ Ley 26.173.....	53
▪ Ley 26.684.....	54
▪ Ley 26.759.....	64
▪ Decreto 420/96.....	66
▪ Decreto 721/00.....	69
▪ Decreto 1171/03.....	79
▪ Decreto 1991/11.....	81
▪ Decreto 1993/11.....	82

1.1. NORMAS RELACIONADAS

▪ Ley 25.865 y Decreto reglamentario 806/04.....	91
▪ Ley 26.160.....	107
▪ Ley 26.355.....	107
▪ Resolución Conjunta 4263/10, 9/10 y 2880/10.....	109

2. LEGISLACION PROVINCIAL

2.1. BUENOS AIRES

▪ Ley 13.136.....	113
▪ Decreto reglamentario 2993/06.....	115
▪ Ley 14.650.....	120

2.2. ENTRE RIOS

• Ley 10.151	123

2.3. LA RIOJA

▪ Ley 8901.....	126

2.4. MENDOZA

• Ley 8.435.....	128

2.5. MISIONES

▪ Ley III – Nº 10 (Decreto 916) Ferias Francas.....	131

2.6. NEUQUÉN

▪ Ley 2.782 (Decreto 2220) Ferias Francas.....	134

2.7. RÍO NEGRO

▪ Ley 4.499.....	134

3. ORDENANZAS MUNICIPALES

3.1 BELLA VISTA (CORRIENTES)

▪ N° 919/09..... 138

3.2 LUIS BELTRÁN (RÍO NEGRO)

▪ N° 24/10..... 138

3.3. MORENO (BUENOS AIRES)

▪ N° 4100/09.....138

3.4. NEUQUÉN (NEUQUÉN)

▪ N° 7723/96, 7949/97 y 7950/97 138

3.5. ROSARIO (SANTE FE)

▪ N° 7358/02.....138
▪ N° 7721/04.....138
▪ N° 7844/05.....138
▪ N° 8290/08.....138
▪ N° 8342/08.....138
▪ N° 8682/10.....138

3.6. VICTORIA (ENTRE RÍOS)

▪ N° 2180/03.....139

4. LEGISLACION EXTRANJERA

4.1. ANTIGUA Y BARBUDA

▪ Ley 9/10.....140

4.2. BAHAMAS

▪ Ley de Sociedades Cooperativas del 4/10/05..... 207

4.3. BARBADOS

▪ Ley de Sociedades Cooperativas del 6/8/90.....245

4.4.BELGICA

▪ Consejo Nacional de la Cooperación.....245

4.5.BELIZE

▪ Ley de Sociedades Cooperativas del 31/12/00..... 248
▪ Reglamentación de la ley del 31/12/03..... 259

4.6. BOLIVIA

▪ Ley 351/2013..... 269

4.7. BRASIL

▪ Ley 5764..... 286

4.8 CANADA

▪ Ley Canadiense de Cooperativas..... 303

4.9. CHILE

▪ Ley General de Cooperativas.....422

4.10. COLOMBIA

▪ Ley 79/88..... 446
▪ Ley 454/88.....468

4.11. COSTA RICA

▪ Ley 6.756/82..... 485

4.12. CUBA

▪ Ley 95/02..... 527
▪ Decreto-Ley 305/12..... 544
▪ Decreto-Ley 306/12..... 550
▪ Decreto 309/12..... 559
▪ Resolución 570/12.....572
▪ Resolucion 427/12.....576

4.13. DOMINICA

▪ Ley de Sociedades Cooperativas del 15/4/11.....584

4.14. ECUADOR

▪ Artículos de la Constitución de la República del Ecuador..... 681
▪ Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector
Financiero Popular y Solidario..... 682
▪ Reglamento a Ley Orgánica Economía Popular y Solidaria..... 721

4.15. EL SALVADOR

▪ Decreto 339/86..... 760

4.16. ESPAÑA

▪ Ley 5/11..... 780

4.17. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

▪ The Federal Credit Union (revisada al 30/6/07)..... 792
▪ Coopèrative Unite States Code..... 896

4.18. FRANCIA

▪ Ley 47-1775.....900

4.18. GUATEMALA

▪ Decreto 82/78.....927

4.19. HAITI

Ley de Cooperativas de Ahorro y Créditos del 10/7/02.....941

4.20. HONDURAS

- Ley del Sector Social de la Economía.....966
- Decreto Legislativo 65/87 969

4.21. ITALIA

- Código Civil art. 14 al 42..... 990
- Ley 266 del 11/8/91..... 995
- Ley 381 del 8/11/91.....1001
- Decreto Legislativo 460 de 1997.....1004
- Ley 383 del 27/12/00..... 1022
- Ley 328 del 8/11/00..... 1036
- DPR 361 del 2000..... 1064
- Ley del 7/8/97 No. 266..... 1071
- Ley del 8/11/91..... 1071
- Ley del 13/06/05 No. 118..... 1074
- Decreto Legislativo del 24/3/06 – No. 115..... 1076

4.22. JAMAICA

- Ley de Sociedades Cooperativas del 1/10/50..... 1087
- Reglamentación de la Ley..... 1087

4.23. MEXICO

- Ley de la Economía Social y Solidaria..... 1087
- Ley General de Sociedades Cooperativas del 4/6/01..... 1102
- Ley de Ahorro y Crédito Popular del 4/6/01..... 1122

4.24. NICARAGUA

- Ley 499..... 1171

4.25. PANAMA

- Ley 17/97..... 1202

4.26. PARAGUAY

- Ley 438/94..... 1226

4.27. PERU

- Decreto Supremo 74/90..... 1249
- Resolución SBS N° 621/03..... 1290

4.28. PUERTO RICO

- Ley 50/94..... 1293
- Ley 255/02..... 1337
- Ley 163/02..... 1390
- Ley 114/01..... 1395

4.29. REPUBLICA DOMINICANA

- Ley 127/64..... 1423

4.30. SAN CRISTOBAL Y NIEVES (SAINT KITTS AND NEVIS)

- Ley 31/11..... 1436

4.31. SANTA LUCIA

- Ley 28/99..... 1527

4.32. SURINAM

- Ley de Sociedades Cooperativas del 8/7/44.....1527

4.33. TRINIDAD Y TOBAGO

- Ley 22/71..... 1537

4.34. UNION EUROPEA

- Reglamento (CE) N° 1435/2003 de 22 de julio de 2003, del Consejo relativo al estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE)..... 1574
- Directiva 2003/72/CE del Consejo, de 22 julio de 2003, por la que se completa el estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea (SCE) en lo que respecta a la implicación de los trabajadores..... 1607

4.35. URUGUAY

- Ley 17.794.....1621
- Ley 17.978.....1623
- Ley 18.407.....1626

4.36. VENEZUELA

- Decreto con Fuerza de Ley Especial de Asociaciones Cooperativas...1675
- Ley Orgánica del Poder Popular.....1698
- Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal.....1701

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo ha sido realizado por el personal técnico de la Comisión de Economías Regionales, **Economía Social**, Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Senado de la Nación entre febrero y octubre de 2013, y actualizado a julio de 2015 (en particular en la normativa nacional).

Un antecedente importante ha sido contar con documento denominado “2º Foro hacia Otra Economía. Comisión de Legislación. Dossier: Latinoamérica camina hacia otra economía: Legislación, contextos y problemas cotidianos”¹: Otro antecedente importante ha sido el documento presentado al Encuentro Pre Congreso Argentino de las Cooperativas 2012, “Derecho Cooperativo: debate en el Año Internacional de las Cooperativas: La Legislación sobre la Economía Social y la Legislación Cooperativa”, por el Dr. Dante Cracogna.²

Cabe destacar también la Jornada de Derecho Cooperativo organizada por COOPERAR el día 18 de septiembre de 2013 en el Centro Cultural de la Cooperación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se presentaron 32 ponencias que se pueden consultar en el siguiente sitio: <http://www.cooperar.coop/web/derechocooperativo#Ponencia>

La Alianza Cooperativa Internacional ha trabajado, en particular en América Latina, para dar un marco normativo en esta temática (véase, por ejemplo, el documento: http://www.ilo.org/public/spanish/support/lib/resource/subject/coop/ley_marco_al.pdf). Por su parte la ACI Américas en su sitio: <http://www.aciamericas.coop/-Legislacion-Cooperativa-en-las-45-> proporciona información sobre legislación cooperativa de los países del continente americano y del que se ha bajado la correspondiente a cada país del que no se disponía información. En algún caso, cuando el archivo se presentaba en pdf y no fue posible su conversión total (de manera fidedigna) se ha colocado el link para su lectura y eventual impresión. También se pueden consultar distintos documentos sobre legislación en http://www.aciamericas.coop/spip.php?page=buscatemas&id_mot=41

Esta organización internacional organizó para los días 9 y 10 de octubre de 2013 un Congreso Continental de Derecho Cooperativo en Guarujá, Sao Paulo, Brasil, que posiblemente en un futuro se puedan consultar en el sitio mencionado en el párrafo anterior o en una “pestaña” específica de la página web <http://www.aciamericas.coop/> También se puede señalar que un texto muy importante es el libro editado por Cracogna, D., Fici, A., y Hagen, H (eds.) denominado International Handbook of Cooperative Law, Ed. Springer, 2013³.

Se agradece el aporte realizado las Direcciones de Referencia Legislativa e Información Parlamentaria del Congreso argentino respecto de legislación comparada. Para más referencias se sugiere también entrar al sitio: <http://www.senado.gov.ar/micrositios/RedParlamentarios/>

Este trabajo es una versión preliminar agradeciendo los aportes que permitan enriquecerla y completarla.

1. LEGISLACION NACIONAL

▪ Ley 19.331

Bs. As., 3/11/71

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto de la Revolución Argentina,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LA LEY:

¹ Se agradece a la Lic. MA Alicia Alcaraz el haber aportado esta documentación y al Lic. Javier Goldin la referencia sobre la Provincia de Buenos Aires..

² Se agradece a la Dra. Mirta Vuotto el haber aportado esta documentación.

³ Una síntesis de esta obra se puede visualizar en el siguiente documento: <http://home.econ.uba.ar/economicas/sites/default/files/u14/Documento%2086.pdf> y en el evento de esta Comisión en: <http://www.senado.gov.ar/prensa/12914/noticias>

ARTICULO 1.- Créase el INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL que funcionará como Organismo descentralizado del Ministerio de Bienestar Social de la Nación, con ámbito de actuación nacional, de conformidad con los términos de la presente Ley.

ARTICULO 2.- El Instituto Nacional de Acción Mutual será la autoridad de aplicación del régimen legal de las asociaciones mutuales y tendrá por fin principal concurrir a la promoción y desarrollo de las mutualidades, a cuyo efecto ejercerá las siguientes funciones:

- a) Reconocer a las asociaciones mutuales y conceder, denegar o retirar a dichas asociaciones la autorización para actuar como tales en todo el territorio de la Nación, llevar el Registro Nacional de Mutualidades y otorgar los respectivos certificados;
- b) Ejercer, con el mismo alcance, el control público y la superintendencia de esas asociaciones, fiscalizando su organización, funcionamiento, solvencia, calidad y naturaleza de las prestaciones y su disolución y liquidación;
- c) Asistir y asesorar técnicamente a las asociaciones mutuales y a las instituciones públicas y privadas en general en los aspectos social, educativo, económico, organizativo, jurídico, financiero y contable, vinculados al funcionamiento y desarrollo de las mismas asociaciones;
- d) Apoyar económica y financieramente a las asociaciones mutuales, por vía de préstamos de fomento o subsidios y ejercer los controles y acciones pertinentes en relación al apoyo acordado. El apoyo asistencial y financiero se realizará considerando prioritariamente las limitaciones socio-económicas de los sectores protegidos y a las necesidades regionales;
- e) Gestionar ante los organismos públicos de cualquier jurisdicción y ante las entidades representativas del movimiento mutual y centros de estudio, investigación y difusión, la adopción de medidas y la formulación de programas y planes que sirvan a los fines de esta ley, a cuyo efecto podrá celebrar acuerdos;
- f) Promover el perfeccionamiento de la legislación en materia de asociaciones mutuales;
- g) Favorecer la realización de congresos, organización de ateneos y de toda otra forma de difusión del mutualismo.

ARTICULO 3.- El Instituto Nacional de Acción Mutual será conducido y administrado por un Directorio integrado en la siguiente forma:

- a) Un presidente, un vicepresidente y cinco vocales por el Estado nacional, los que serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Bienestar Social;
- b) Dos vocales por el ente confederal más representativo; un vocal por la federación más representativa de la Capital Federal; un vocal por la federación más representativa de la provincia de Buenos Aires y dos vocales por las federaciones más representativas del interior del país excluida la provincia de Buenos Aires. Todos los vocales comprendidos en el presente inciso serán designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta del ente confederal más representativo.

Los integrantes del directorio durarán 3 años en sus respectivos mandatos, pudiendo éstos ser prorrogados por iguales períodos sucesivos, y percibirán la retribución que les fije el Poder Ejecutivo Nacional.

ARTICULO 4.- Para que el Directorio pueda sesionar válidamente, se requerirá un quórum de la mitad más uno de sus miembros. El Presidente y los demás miembros del Directorio tendrán un voto. En caso de empate el Presidente tendrá doble voto

ARTICULO 5.- Corresponde al Directorio:

- a) Ejercer las funciones atribuidas al Instituto en el artículo 2º;
- b) Administrar los recursos del Instituto y el Fondo de Promoción Mutual creado por la Ley 17.376;
- c) Dictar su reglamento interno de conformidad con esta ley y sus normas reglamentarias;
- d) Proyectar y elevar la estructura orgánico-funcional y dotación de personal del organismo;

- e) Proyectar el presupuesto anual de gastos, cálculo de recursos, cuenta de inversiones y redactar la memoria anual;
- f) Establecer delegaciones a los fines del mejor ejercicio de sus funciones en lugares del territorio nacional que considere conveniente.

ARTICULO 6.- El Presidente representará al Instituto Nacional de Acción Mutua! en todos sus actos y deberá:

- a) Observar y hacer observar esta Ley y sus disposiciones reglamentarias;
- b) Convocar y presidir las reuniones del Directorio;
- c) Ejecutar las resoluciones del Directorio y velar por su cumplimiento, pudiendo delegar funciones en los demás miembros del Directorio y en funcionarios de su dependencia.

ARTICULO 7.- El Instituto Nacional de Acción Mutua! contará con los siguientes recursos:

- a) Las sumas que fije el Presupuesto General de la Nación y las que se le acuerden por leyes especiales;
- b) Los créditos que le asignen organismos nacionales, provinciales y municipales;
- c) Los bienes y recursos que actualmente forman parte del Departamento de Mutualidades;
- d) las contribuciones recaudadas por el Fondo de Promoción Mutua!, de conformidad con la Ley 17.376 y las que se recauden en el futuro;
- e) Las donaciones, legados, subsidios o subvenciones;
- f) El importe de las multas que resultarán de aplicación;
- g) El reintegro de los préstamos y sus intereses;
- h) Los saldos no usados de ejercicios anteriores;
- i) Cualquier otro recurso que establecieran disposiciones legales o reglamentarias.

ARTICULO 8.- Dentro de los treinta (30) días de la sanción de la presente Ley, el Ministerio de Bienestar Social elevará al Poder Ejecutivo el proyecto de estructura orgánico-funcional del Instituto Nacional de Acción Mutua! con su dotación de personal y el presupuesto de gastos y recursos del organismo hasta el fin del presente ejercicio.

ARTICULO 9.- Hasta tanto se fije el régimen de recursos, el Ministerio de Bienestar Social adelantará al Instituto los fondos necesarios para atender sus gastos.

ARTICULO 10.- El actual Departamento de Mutualidades, dependiente de la Subsecretaría de Promoción y Asistencia Social pasará a formar parte del Instituto Nacional de Acción Mutua! con su personal y dependencias.

ARTICULO 11.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. LANUSSE. Francisco G. Manrique.

▪ Ley 20.321

LEY ORGANICA PARA LAS ASOCIACIONES MUTUALES

Buenos Aires, 27 de abril de 1.973.

B.O.: 10/5/1.973.

Al Excelentísimo Señor
Presidente de la Nación:

Tengo el honor de someter a consideración de V. E. el proyecto de Ley Orgánica para las Asociaciones Mutuales, que constituirá el instrumento idóneo para desarrollar y consolidar a las entidades mutuales argentinas.

El Instituto Nacional de Acción Mutua!, dependiente de este Ministerio en cumplimiento de las funciones que le asigna la Ley 19.331, evaluó la significación social de la estructura mutualista y las posibilidades que ofrece como medio idóneo y eficaz para impulsar el desarrollo social del país. Pudo establecer así los beneficios y la oportunidad de legislar una adecuada y actualizada política capaz de proyectar a la organización mutualista como factor de acción comunitaria con eficiencia operativa, y así resolver al menor costo social muchos problemas fundamentales que interesan al Estado.

La ley que se ha proyectado actualiza las disposiciones en vigencia y, a la vez, incorpora experiencias positivas y observaciones válidas que tienen como fuente las diversas manifestaciones del quehacer mutual nacional, a través de Congresos, Jornadas y otros eventos.

Como punto especial de interés merece destacarse que estas entidades, por la sola inscripción en el Registro Nacional de Mutualidades, adquieren el carácter de personas jurídicas, pudiendo, por lo tanto, adquirir derechos y contraer obligaciones, como sujeto de Derecho.

Se establece, también, un nuevo régimen de fiscalización de las entidades por parte del Instituto Nacional de Acción Mutual, que está destinado a impedir el falseamiento del concepto mutual que debe ser celosamente preservado por el Estado.

La acción de fomento se expresa en la nueva ley por medio de los siguientes tópicos: asistencia técnica exenciones impositivas y política crediticia.

La asistencia técnica se concreta a través de toda la actividad orientadora y fiscalizadora del Estado, que se inicia desde el acto de constitución de la mutual y continúa durante toda su trayectoria.

Las disposiciones de exención impositiva, en el aspecto de fomento por vía de liberación de gravámenes, surge de la misma necesidad de desarrollo de las mutuales, ya que si el Estado tiene el propósito de fomentarlas no es prudente que las grave con cargas impositivas de cualquier naturaleza. La exención impositiva se traduce en el menor costo social de los servicios realizados por las comunidades organizadas bajo la forma de mutual.

En cuanto a la política crediticia, ella surge también como una necesidad imperiosa frente a la urgencia que tienen las mutuales de modernizar sus sedes, instalaciones y equipos, tendientes a brindar a los asociados mejores prestaciones al menor costo. La fuente principal de los recursos para el otorgamiento de los préstamos proviene del aporte de los propios mutualistas, que deben efectuarlos en las condiciones prescriptas por el artículo 9° del proyecto. Si bien ésta no es una nueva disposición, pues la ley vigente tiene previsto un mecanismo similar, en cambio el proyecto actualiza los índices y fija la periodicidad del aporte.

Estimo conveniente precisar a V. E. que el proyecto de ley que se acompaña representa un resumen ajustado a los principios básicos que caracterizan a la asociación mutual; agrupando orgánicamente el conjunto de normas necesarias para que estas entidades puedan desarrollar su cometido de integración comunitaria y lograr la cohesión social de grupos de personas animadas a dar solución a sus necesidades primarias en los campos de la salud, el crédito, vivienda, previsión, recreación y la cultura.

La legislación vigente ha sido superada por el tiempo, por lo que se impone un nuevo ordenamiento de la materia y éste es, precisamente, el objeto del dispositivo legal que se ha elaborado.

Esta nueva legislación está destinada a orientar, asistir, apoyar y promover ese vasto movimiento mutual argentino, que ha elegido esta figura jurídica como herramienta para su progreso social y cultural.

Por último corresponde advertir que el proyecto responde a las Políticas Nacionales números 45, 46, 49 y 59 establecidas por el Decreto 46/70 de la Junta de Comandantes en Jefe.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.
Oscar R. Puiggrós.- Gervasio R. Colombres.

▪ **LEY N° 20.321**

Bs. As., 27/4/73.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5° del estatuto de la Revolución Argentina,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º-Las asociaciones mutuales se regirán en todo el territorio de la Nación por las disposiciones de la presente Ley y por las normas que dicte el Instituto Nacional de Acción Mutual.

ARTICULO 2º-Son asociaciones mutuales las constituidas libremente sin fines de lucro por personas inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual, mediante una contribución periódica.

ARTICULO 3º-Las asociaciones mutuales deberán inscribirse en el Registro Nacional de Mutualidades previo cumplimiento de los recaudos que establezca el Instituto Nacional de Acción Mutual. La inscripción en el Registro acuerda a la Asociación el carácter de Sujeto de Derecho, con el alcance que el Código Civil establece para las personas jurídicas, pudiendo recurrirse por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal para el supuesto caso de que dicha inscripción fuera denegada.

ARTICULO 4º-Son prestaciones mutuales aquellas que, mediante la contribución o ahorro de sus asociados o cualquier otro recurso lícito, tiene por objeto la satisfacción de necesidades de los socios ya sea mediante asistencia médica, farmacéutica, otorgamiento de subsidios, préstamos, seguros, construcción y compraventa de viviendas, promoción cultural, educativa, deportiva y turística, prestación de servicios fúnebres, como así también cualquiera otra que tenga por objeto alcanzarles bienestar material y espiritual. Los ahorros de los asociados pueden gozar de un beneficio que estimule la capacidad ahorrativa de los mismos.

ARTICULO 5º-A los fines establecidos en el artículo anterior, las mutualidades podrán celebrar convenios entre sí y con otras entidades que tengan fines solidarios.

ARTICULO 6º-El Estatuto social será redactado en idioma nacional y deberá contener:

- a) El nombre de la entidad, debiendo incorporarse a él alguno de los siguientes términos: Mutual, Socorros Mutuos, Mutualidad, Protección Recíproca u otro similar;
- b) Domicilio, fines y objetivos sociales;
- c) Los recursos con que contará para el desenvolvimiento de sus actividades;
- d) Las categorías de socios, sus derechos y obligaciones;
- e) La forma de establecer las cuotas y demás aportes sociales;
- f) La composición de los Organos Directivos y de Fiscalización, sus atribuciones, deberes, duración de sus mandatos y forma de elección.
- g) Las condiciones de convocatoria, funcionamiento y facultades de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias;
- h) Fecha de clausura de los ejercicios sociales, los que no podrán exceder de un año.

ARTICULO 7º-El estatuto social determinará las condiciones que deben reunir las personas para ingresar a la asociación, relacionadas con su profesión, oficio, empleo, nacionalidad, edad, sexo u otras circunstancias que no afecten los principios básicos del mutualismo, quedando prohibida la introducción de cláusulas que restringen la incorporación de argentinos, como asimismo que coloque a éstos en condiciones de inferioridad con relación a los de otra nacionalidad. No podrán establecerse diferencias de credos, razas o ideologías.

ARTICULO 8º-Las categorías de socios serán establecidas por las asociaciones mutuales, dentro de las siguientes:

a) Activos: Serán las personas de existencia visible, mayores de 21 años que cumplan los requisitos exigidos por los estatutos sociales para esta categoría, las que tendrán derecho a elegir e integrar los Organos Directivos.

b) Adherentes: Serán las personas de existencia visible, mayores de 21 años que cumplan los requisitos exigidos por los estatutos sociales para esta categoría y las personas jurídicas, no pudiendo elegir o integrar los Organos Directivos.

c) Participantes: El padre, madre, cónyuge, hijas solteras, hijos menores de 21 años y hermanas solteras del socio activo, quienes gozarán de los servicios sociales en la forma que determine el estatuto, sin derecho a participar en las Asambleas ni a elegir ni ser elegidos.

ARTICULO 9°-Los socios de las entidades mutuales, cualquiera fuera su categoría, deberán aportar con destino al Instituto Nacional de Acción Mutua el 1 % de la cuota societaria. Tal aporte no podrá ser inferior a veinte centavos de austral (A 0.20) (*) por asociado y por mes. Las entidades mutuales serán agentes de retención debiendo ingresar los fondos dentro del mes siguiente de su percepción.

ARTICULO 10.-Los socios podrán ser sancionados en la forma que determine el estatuto social, pero las causales de exclusión o de expulsión no podrán ser otras que las siguientes:

Son causas de exclusión:

- a) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por los estatutos o reglamentos;
- b) Adeudar tres mensualidades, si el estatuto no estableciera un plazo mayor. El Organismo Directivo deberá notificar obligatoriamente mediante forma fehaciente, la morosidad a los socios afectados, con diez días de anticipación a la fecha en que serán suspendidos los derechos sociales e intimarle al pago para que en dicho término pueda ponerse al día;
- c) Cancelar el seguro, en las mutuales de seguros.

Son causas de expulsión:

- a) Hacer voluntariamente daño a la asociación u observar una conducta notoriamente perjudicial a los intereses sociales.
- b) Cometer actos de deshonestidad en perjuicio de la asociación.

ARTICULO 11.-Los socios sancionados o afectados en sus derechos o intereses, podrán recurrir por ante la primera Asamblea Ordinaria que se realice, debiendo interponer el recurso respectivo dentro de los treinta días de notificados de la medida, ante el Organismo Directivo.

ARTICULO 12.-Las asociaciones mutualistas se administrarán por un Organismo Directivo compuesto por cinco o más miembros, y por un Organismo de Fiscalización formado por tres o más miembros, sin perjuicio de otros órganos sociales que los estatutos establezcan determinando sus atribuciones, actuaciones, elección o designación.

ARTICULO 13.-A los candidatos a los Organismos Directivos o de Fiscalización no podrá exigírseles una antigüedad como socios mayor de dos años. Además no podrán ser electos quienes se encuentran:

- a) Fallidos, concursados civilmente y no rehabilitados.
- b) Condenados por delitos dolosos.
- c) Inhabilitados por el Instituto Nacional de Acción Mutua o por el Banco Central de la República Argentina mientras dure su inhabilitación.

En caso de producirse cualquiera de las situaciones previstas en los incisos anteriores, durante el transcurso del mandato, cualquiera de los miembros de los Organismos Sociales, será separado de inmediato de su cargo.

ARTICULO 14.-El término de cada mandato no podrá exceder de cuatro años. El asociado que se desempeña en un cargo electivo podrá ser reelecto, por simple mayoría de votos, cualquiera sea el cargo que hubiera desempeñado y su mandato podrá ser revocado en Asamblea Extraordinaria convocada al efecto y por decisión de los 2/3 de los asociados asistentes de la misma.

ARTICULO 15.-Los miembros de los Organismos Directivos, así como de los Organismos de Fiscalización serán solidariamente responsables del manejo e inversión de los fondos sociales y de la gestión administrativa durante el término de su mandato y ejercicio de sus funciones, salvo que existiera constancia fehaciente de su oposición al acto que perjudique los intereses de la asociación. Serán personalmente responsables asimismo de las multas que se apliquen a la asociación, por cualquier infracción a la presente Ley o a las resoluciones dictadas por el Instituto Nacional de Acción Mutua.

ARTICULO 16.-Los deberes y atribuciones del Organismo Directivo, sin perjuicio de otros que les confieran los estatutos, serán los siguientes:

- a) Ejecutar las resoluciones de las Asambleas, cumplir y hacer cumplir el estatuto y los reglamentos;
- b) Ejercer en general todas aquellas funciones inherentes a la dirección, administración y representación de la Sociedad, quedando facultado a este respecto para resolver por sí

los casos no previstos en el estatuto, interpretándolo si fuera necesario, con cargo de dar cuenta a la Asamblea más próxima que se celebre;

c) Convocar a Asambleas;

d) Resolver sobre la admisión, exclusión, o expulsión de socios;

e) Crear o suprimir empleos, fijar su remuneración, adoptar las sanciones que correspondan a quienes los ocupen, contratar todos los servicios que sean necesarios para el mejor logro de los fines sociales;

f) Presentar a la Asamblea General Ordinaria: la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Organo de Fiscalización correspondiente al ejercicio fenecido;

g) Establecer los servicios y beneficios sociales y sus modificaciones y dictar sus reglamentaciones que deberán ser aprobados por la Asamblea;

h) Poner en conocimiento de los socios, en forma clara y directa, los estatutos y reglamentos aprobados por el Instituto Nacional de Acción Mutual.

ARTICULO 17.-Los deberes y atribuciones del Organo de Fiscalización, sin perjuicio de otros que les confieran los estatutos serán los siguientes:

a) Fiscalizar la administración, comprobando mediante arqueos el estado de las disponibilidades en caja y bancos;

b) Examinar los libros y documentos de la asociación, como asimismo efectuar el control de los ingresos, por períodos no mayores de tres meses;

c) Asistir a las reuniones del Organo Directivo y firmar las actas respectivas;

d) Dictaminar sobre la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos presentados por el Organo Directivo;

e) Convocar a Asamblea Ordinaria cuando omitiera hacerlo el Organo Directivo;

f) Solicitar al Organo Directivo la convocatoria a Asamblea Extraordinaria cuando lo juzgue conveniente, elevando los antecedentes al Instituto Nacional de Acción Mutual cuando dicho Organo se negare a acceder a ello;

g) Verificar el cumplimiento de las leyes, resoluciones, estatutos y reglamentos, en especial en lo referente a los derechos y obligaciones de los asociados y las condiciones en que se otorgan los beneficios sociales.

El Organo de Fiscalización cuidará de ejercer sus funciones de modo que no entorpezca la regularidad de la administración social.

ARTICULO 18.-El llamado a Asamblea se efectuará mediante la publicación de la convocatoria y orden del día en el Boletín Oficial o en uno de los periódicos de mayor circulación en la zona, con treinta días de anticipación.

ARTICULO 19.-Las asociaciones mutuales están obligadas a presentar al Instituto Nacional de Acción Mutual y poner a disposición de los socios, en la secretaría de la entidad, con diez días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, la convocatoria, orden del día y detalle completo de cualquier asunto a considerarse en la misma; en caso de tratarse de una Asamblea Ordinaria deberán agregarse a los documentos mencionados la Memoria del ejercicio, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Organo de Fiscalización.

ARTICULO 20.-Se formará un padrón de los asociados en condiciones de intervenir en las Asambleas y elecciones, el que deberá estar en la Mutual a disposición de los asociados, con una anticipación de treinta días a la fecha de las mismas.

ARTICULO 21.-Los asociados participarán personalmente y con un sólo voto en las Asambleas, no siendo admisible el voto por poder. Los miembros del Organo Directivo y del Organo de Fiscalización no tendrán voto en los asuntos relacionados con su gestión. El quórum para cualquier tipo de Asamblea será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada la Asamblea podrá sesionar válidamente, 30 minutos después, con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor que el de los miembros del Organo Directivo y Organo de Fiscalización.

ARTICULO 22.-Las resoluciones de las Asambleas se adoptarán por la mayoría de la mitad más uno de los socios presentes, salvo los casos de revocaciones de mandatos contemplados en el artículo 14 o en los que el estatuto social fije una mayoría especial superior. Ninguna Asamblea de asociados, sea cual fuere el número de presentes, podrá considerar asuntos no incluidos en la convocatoria.

ARTICULO 23.-La elección y la renovación de las autoridades se efectuará por voto secreto, ya sea en forma personal o por correo, salvo el caso de lista única que se proclamará directamente en el acto eleccionario. Las listas de candidatos serán oficializadas por el Organo Directivo con quince días hábiles de anticipación al acto eleccionario, teniendo en cuenta:

- a) Que los candidatos reúnan las condiciones requeridas por el estatuto.
- b) Que hayan prestado su conformidad por escrito y estén apoyadas con la firma de no menos del 1% de los socios con derecho a voto.

Las impugnaciones serán tratadas por la Asamblea antes del acto eleccionario, quien decidirá sobre el particular.

ARTICULO 24.-Las Asambleas Ordinarias se realizarán una vez por año, dentro de los cuatro meses posteriores a la clausura de cada ejercicio y en ellas se deberá:

- a) Considerar el Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, así como la Memoria presentada por el Organo Directivo y el Informe del Organo de Fiscalización.
- b) Elegir a los integrantes de los órganos sociales electivos que reemplacen a los que finalizan su mandato.
- c) Aprobar o ratificar toda retribución fijada a los miembros de los órganos Directivo y de Fiscalización.
- d) Tratar cualquier otro asunto incluido en la convocatoria.

ARTICULO 25.- Las Asambleas Extraordinarias serán convocadas siempre que el Organo Directivo lo juzgue conveniente o cuando lo solicite el Organo de Fiscalización o el 10% de los asociados con derecho a voto. En este último caso los Organos Directivos no podrán demorar su resolución más de treinta días desde la fecha de presentación. Si no se tomase en consideración la solicitud o se la negase infundadamente, el Instituto Nacional de Acción Mutual podrá intimar a las autoridades sociales para que efectúen la convocatoria dentro del plazo de cinco días hábiles de notificados, y si así no se cumpliera, intervendrá la asociación a los efectos exclusivos de la convocatoria respectiva.

ARTICULO 26.-Las Asambleas de las asociaciones mutualistas que tengan filiales, seccionales o delegaciones, podrán cuando el estatuto social lo establezca, realizarlas del modo siguiente: la central y cada un de las filiales, seccionales o delegaciones nombrarán sus delegados. Constituidos los delegados en Asamblea, considerarán los puntos de la convocatoria, contando con un número de votos igual al 1% de los asociados que representan con derecho a voto, computándose por ciento toda fracción mayor de cincuenta. En estos casos los estatutos podrán establecer que las Asambleas se realicen cada dos años, debiendo, anualmente, darse a conocer a los socios el Balance y la Memoria del ejercicio.

ARTICULO 27.-El patrimonio de las asociaciones mutuales estará constituido:

- a) Por las cuotas y demás aportes sociales.
- b) Por los bienes adquiridos y sus frutos.
- c) Por las contribuciones, legados y subsidios.
- d) Por todo otro recurso lícito.

ARTICULO 28.-Los fondos sociales se depositarán en entidades bancarias a la orden de la asociación y en cuenta conjunta de dos o más miembros del Organo Directivo.

ARTICULO 29.-Las asociaciones mutualistas constituidas de acuerdo a las exigencias de la presente ley quedan exentas en el orden nacional, en el de la Municipalidad de la Capital Federal y en el Territorio Nacional de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de todo impuesto, tasa o contribución de mejoras, en relación a sus bienes y por sus actos. Queda entendido que este beneficio alcanza a todos los inmuebles que tengan las asociaciones, y cuando de éstos se obtengan rentas, condicionado a que las mismas ingresen al fondo social para ser invertidas en la atención de los fines sociales determinados en los respectivos estatutos de cada asociación. Asimismo quedan exentos del Impuesto a los Réditos los intereses originados por los depósitos efectuados en instituciones mutualistas por sus asociados.

Quedan también liberadas de derechos aduaneros por importación de aparatos, instrumental, drogas y específicos cuando los mismo sean pedidos por las asociaciones mutualistas y destinados a la prestación de sus servicios sociales.

El Gobierno Nacional gestionará de los Gobiernos Provinciales la adhesión de las exenciones determinadas en el presente artículo.

ARTICULO 30.-Las asociaciones mutuales podrán fusionarse entre sí. Para ello se requerirá:

- a) Haber sido aprobada previamente la fusión en Asamblea de socios.
- b) Aprobación del Instituto Nacional de Acción Mutual.

DE LAS FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES

ARTICULO 31.-Las asociaciones mutualistas podrán constituir Federaciones y Confederaciones.

ARTICULO 32.-Las Federaciones y Confederaciones previstas en el artículo anterior, para funcionar como tales, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Mutualidades, gozando de todos los derechos y debiendo cumplir con todas las obligaciones emergentes de esta Ley y que sean compatibles con su condición.

ARTICULO 33.-Son derechos y obligaciones de las entidades previstas en el artículo 31 los siguientes:

- a) Defender y representar ante las autoridades públicas y personas privadas los intereses mutuales de las entidades que se hallan en su jurisdicción;
- b) Intervenir por derecho propio, o como tercero interesado, cuando la naturaleza de la cuestión debatida pueda afectar directa o indirectamente los intereses mutuales;
- c) Intervenir en la celebración de acuerdos, pactos o convenios generales;
- d) Contribuir a la promoción, ampliación y perfeccionamiento de la legislación, colaborando con el Estado como organismo técnico.

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 34.-Queda terminantemente prohibido el uso de las expresiones "Socorros Mutuos", "Mutualidad", "Protección Recíproca", "Previsión Social" o cualquier otro aditamento similar en el nombre de las sociedades o empresas que no estén constituidas de acuerdo con las disposiciones de la presente.

La violación de esta prohibición será penada con las multas previstas en el artículo siguiente y la clausura de sus instalaciones.

ARTICULO 35.-Las infracciones a cualquiera de las disposiciones de la presente Ley o a las normas y resoluciones complementarias, son pasibles en forma aislada o conjunta de:

- a) Multas de cincuenta (\$ 50) a cinco mil pesos (\$5.000);
- b) Inhabilitación, temporal o permanente, para desempeñarse en los órganos establecidos por los estatutos, a las personas responsables de las infracciones;
- c) Intervención a la entidad;
- d) Retiro de la autorización para funcionar como Mutual y liquidación de la asociación infractora;

El procedimiento para el cobro compulsivo de las multas será el establecido para las ejecuciones fiscales en el Libro III, Título III, Capítulo II, Sección 4a. del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación y el que establece la Ley 18.695, en cuanto sean de aplicación.

ARTICULO 36.-Las sanciones a que se refiere el artículo anterior y liquidación judicial o extrajudicial de las asociaciones mutualistas, estará a cargo del Instituto Nacional de Acción Mutual, en todo el territorio de la República. El retiro de la autorización para funcionar como mutual lleva implícita la liquidación de la entidad de que se trate. De tales decisiones podrá recurrirse por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.

ARTICULO 37.-Las asociaciones mutualistas no podrán ser concursadas civilmente.

En caso de solicitarse su concurso civil, los jueces deberán dar intervención al Instituto Nacional de Acción Mutual para que resuelva, si así correspondiere, la intervención y/o

liquidación social. En consecuencia, no será de aplicación a las entidades mutuales las disposiciones de la Ley de Concursos N° 19.551.

ARTICULO 38.-Las asociaciones mutuales, Federaciones y Confederaciones que actualmente funcionan en el orden Nacional o Provincial están obligadas dentro de los seis meses de promulgada esta Ley a someterse al régimen de la presente; en caso contrario, se procederá sin más trámite a lo determinado en el artículo 36.

ARTICULO 39.-Sustitúyese el inciso d) del artículo 7° de la Ley 19.331 por el siguiente:

"Inc. d): Las contribuciones recaudadas por el Fondo de Promoción Mutual de conformidad con la Ley 17.376 y las que se recauden por el artículo 9° de la Ley".

ARTICULO 40.-Derógase el Decreto - Ley 24.499/45 ratificado por la Ley 12.921 y toda otra disposición que se oponga a la misma.

ARTICULO 41.-Las disposiciones de la presente no afectarán la plena vigencia de la ley 18.610 en los casos a que esta última se refiere.

ARTICULO 42.-Comuníquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

LANUSSE - Colombres - Puiggrós.

(*): El importe y moneda detallados han sido modificados por la siguiente normativa:

Resolución INAM N° 636 / 1991

De acuerdo a la normativa vigente, el importe mínimo actual es de \$ 0.03

▪ **LEY 20.337 - LEY DE COOPERATIVAS**

B.O.: 15/05/1973

Buenos Aires, 2 de mayo de 1973

Excelentísimo Señor Presidente de la Nación:

Tenemos el honor de dirigirnos a V.E con el objeto de elevar a vuestra consideración el adjunto Proyecto de Ley de Cooperativas, destinado a reemplazar a la actual Ley 11.388 y que incorpora a su texto las disposiciones de la Ley 19.219.

La necesidad de actualizar el régimen legal de las cooperativas fue reiteradamente puesta de manifiesto en los últimos años. Este ministerio a recogido dicha necesidad por intermedio del Instituto Nacional de Acción Cooperativa, en cuyo seno se designo una Comisión especial constituida con directores del mismo y representantes del movimiento cooperativo, para abocarse al estudio y elaboración del Anteproyecto respectivo.

La sanción de la Ley de Sociedades Comerciales (N° 19 550), que entró en vigencia a fines del mes de octubre próximo pasado, determinó la conveniencia de que la referida actualización revistiera un carácter más amplio a fin de evitar que por vía de la aplicación supletoria de las disposiciones de la mencionada ley se introdujeran modificaciones al régimen de las cooperativas que no compatibilizaran con la naturaleza propia de estas entidades.

La mencionada Comisión realizó una ponderable labor que culminó con la elaboración del Anteproyecto que fue sometido a consideración del Consejo Consultivo Honorario del Instituto Nacional de Acción Cooperativa, integrado por delegados de los distintos Ministerios , y de las entidades cooperativas más representativas: la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR), conforme a lo prescripto por el artículo 7° de la Ley 19 219. El Anteproyecto mereció la aprobación de dicho cuerpo.

Cabe señalar que se a considerado conveniente apartarse de lo aconsejado por la Comisión el algunos aspectos del Anteproyecto, especialmente en el Capítulo II , con lo cual se arribó al texto que elevamos a V.E.

El proyecto responde a una sentida necesidad y a sido concebido con una moderna técnica legislativa , inspirándose en las fuentes más autorizadas de la materia, por lo que se estima servirá adecuadamente a los fines que la motivan.

Lo específico de la materia y la importancia de las soluciones que el Proyecto incorpora aconsejan la conveniencia de que este Mensaje se integre con la Exposición de Motivos presentada por la Comisión redactora y referida al texto final en la que se analizan y fundamentan los aspectos más importantes relativos a cada institución.

El presente Proyecto se ajusta a las previsiones de las Políticas Nacionales números 59, 66 y 106 establecidas por el Decreto N° 46/70 de la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y encuadra dentro de las competencia asignada al Ministerio de Bienestar Social por el Artículo 28 inciso 22), de la ley 19 013.

Dios guarde a vuestra Excelencia.
Oscar R. Puiggrós
Gervasio R. Colombres

▪ **LEY N°20 337**

Bs As, 02/05/73

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5° del Estatuto de la Revolución Argentina,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:

LEY DE COOPERATIVAS

CAPITULO I - DE LA NATURALEZA Y CARACTERES

Régimen

ARTICULO 1°.- Las cooperativas se rigen por las disposiciones de esta ley.

Concepto. Caracteres

ARTICULO 2°.- Las cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios, que reúnen los siguientes caracteres:

- 1°. Tienen capital variable y duración ilimitada.
 - 2°. No ponen límite estatutario al número de asociados ni al capital.
 - 3°. Conceden un solo voto a cada asociado, cualquiera sea el número de sus cuotas sociales y no otorgan ventaja ni privilegio alguno a los iniciadores, fundadores y consejeros, ni preferencia a parte alguna del capital.
 - 4°. Reconocen un interés limitado a las cuotas sociales, si el estatuto autoriza aplicar excedentes a alguna retribución al capital.
 - 5°. Cuentan con un número mínimo de diez asociados, salvo las excepciones que expresamente admitiera la autoridad de aplicación y lo previsto para las cooperativas de grado superior.
 - 6°. Distribuyen los excedentes en proporción al uso de los servicios sociales, de conformidad con las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 42 para las cooperativas o secciones de crédito.
 - 7°. No tienen como fin principal ni accesorio la propaganda de ideas políticas, religiosas, de nacionalidad, región o raza, ni imponen condiciones de admisión vinculadas con ellas.
 - 8°. Fomentan la educación cooperativa.
 - 9°. Prevén la integración cooperativa.
 10. Prestan servicios a sus asociados y a no asociados en las condiciones que para este último caso establezca la autoridad de aplicación y con sujeción a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 42.
 11. Limitan la responsabilidad de los asociados al monto de las cuotas sociales suscriptas.
 12. Establecen la irrepartibilidad de las reservas sociales y el destino desinteresado del sobrante patrimonial en casos de liquidación.
- Son sujeto de derecho con el alcance fijado en esta ley.

Denominación

ARTICULO 3.- La denominación social debe incluir los términos "cooperativa" y "limitada" o sus abreviaturas.

No pueden adoptar denominaciones que induzcan a suponer un campo de operaciones distinto del previsto por el estatuto o la existencia de un propósito contrario a la prohibición del artículo 2 inciso 7.

Acto cooperativo

ARTICULO 4.- Son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y sus asociados y por aquéllas entre sí en el cumplimiento del objeto social y la consecución de los fines institucionales. También lo son, respecto de las cooperativas, los actos jurídicos que con idéntica finalidad realicen con otras personas.

Asociación con personas de otro carácter jurídico

ARTICULO 5.- Pueden asociarse con personas de otro carácter jurídico a condición de que sea conveniente para su objeto social y que no desvirtúen su propósito de servicio.

Transformación. Prohibición

ARTICULO 6.- No pueden transformarse en sociedades comerciales o asociaciones civiles. Es nula toda resolución en contrario.

CAPITULO II - DE LA CONSTITUCION

Forma

ARTICULO 7.- Se constituyen por acto único y por instrumento público o privado, labrándose acta que debe ser suscripta por todos los fundadores.

Asamblea constitutiva

La asamblea constitutiva debe pronunciarse sobre:

- 1º. Informe de los iniciadores;
- 2º. Proyecto de estatuto;
- 3º. Suscripción e integración de cuotas sociales;
- 4.º Designación de consejeros y síndico;

Todo ello debe constar en un solo cuerpo de acta, en el que se consignará igualmente nombre y apellido, domicilio, estado civil y número de documento de identidad de los fundadores.

Estatuto. Contenido

ARTICULO 8.- El estatuto debe contener, sin perjuicio de otras disposiciones:

- 1º. La denominación y el domicilio;
- 2º. La designación precisa del objeto social;
- 3º. El valor de las cuotas sociales y del derecho de ingreso si lo hubiera, expresado en moneda argentina;
- 4º. La organización de la administración y la fiscalización y el régimen de las asambleas;
- 5º. Las reglas para distribuir los excedentes y soportar las pérdidas;
- 6º. Las condiciones de ingreso, retiro y exclusión de los asociados;
- 7º. Las cláusulas necesarias para establecer los derechos y obligaciones de los asociados;
- 8º. Las cláusulas atinentes a la disolución y liquidación.

Trámite

ARTICULO 9.- Tres copias del acta de constitución firmadas por todos los consejeros y acompañadas de la constancia del depósito en un banco oficial o cooperativo de la vigésima parte del capital suscripto deben ser presentadas a la autoridad de aplicación o al órgano local competente, el cual las remitirá a la autoridad de aplicación dentro de los treinta días. Las firmas serán ratificadas ante ésta o debidamente autenticadas.

Dentro de los sesenta días de recibida la documentación, si no hubiera observaciones, o de igual plazo una vez satisfechas éstas, la autoridad de aplicación autorizará a funcionar

e inscribirá a la cooperativa, hecho lo cual remitirá testimonios certificados al órgano local competente y otorgará igual constancia a aquélla.

Constitución regular

ARTICULO 10.- Se consideran regularmente constituidas, con la autorización para funcionar y la inscripción en el registro de la autoridad de aplicación. No se requiere publicación alguna.

Responsabilidad de fundadores y consejeros

ARTICULO 11.- Los fundadores y consejeros son ilimitada y solidariamente responsables por los actos practicados y los bienes recibidos hasta que la cooperativa se hallare regularmente constituida.

Modificaciones estatutarias

ARTICULO 12.- Para la vigencia de las modificaciones estatutarias se requiere su aprobación por la autoridad de aplicación y la inscripción en el registro de ésta. A tal efecto se seguirá en lo pertinente, el trámite establecido en el artículo 9º.

Reglamentos

ARTICULO 13.- Los reglamentos que no sean de mera organización interna de las oficinas y sus modificaciones deben ser aprobados e inscriptos conforme con lo previsto en el artículo anterior antes de entrar en vigencia.

Sucursales

ARTICULO 14.- Para el funcionamiento de sucursales en distinta jurisdicción debe darse conocimiento al órgano local competente, acreditando la constitución regular de la cooperativa.

Cooperativas constituidas en el extranjero

ARTICULO 15.- Para las constituidas en el extranjero rigen las disposiciones de la Sección XV del Capítulo I de la Ley 19.550 con las modificaciones establecidas por esta ley en materia de autorización para funcionar y registro.

Recursos contra decisiones relacionadas con la autorización para funcionar, modificaciones estatutarias y reglamentos

ARTICULO 16.- Las decisiones de la autoridad de aplicación relacionadas con la autorización para funcionar, modificaciones estatutarias y reglamentos, son recurribles administrativa y judicialmente.

Recurso judicial

El recurso judicial debe ser fundado e interponerse dentro de los treinta días hábiles de notificada la resolución ante la autoridad de aplicación o ante el órgano local competente, que lo remitirá a aquélla dentro del quinto día hábil. La autoridad de aplicación elevará el recurso, junto con los antecedentes respectivos, a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo de la Capital Federal dentro de los cinco días hábiles.

CAPITULO III - DE LOS ASOCIADOS

Condiciones

ARTICULO 17.- Pueden ser asociados las personas físicas mayores de dieciocho años, los menores de edad por medio de sus representantes legales y los demás sujetos de derecho, inclusive las sociedades por acciones, siempre que reúnan los requisitos establecidos por el estatuto.

Dentro de tales supuestos el ingreso es libre, pero podrá ser supeditado a las condiciones derivadas del objeto social.

Derecho de ingreso

ARTICULO 18.- Cuando el estatuto establezca un derecho de ingreso no puede elevarse a título de compensación por las reservas sociales. Su importe no puede exceder el valor de una cuota social.

Personas jurídicas de carácter público, entes descentralizados y empresas del Estado

ARTICULO 19.- El Estado Nacional, las Provincias, los Municipios, los entes descentralizados y las empresas del Estado pueden asociarse a las cooperativas conforme con los términos de esta ley, salvo que ello estuviera expresamente prohibido por sus leyes respectivas. También pueden utilizar sus servicios, previo su consentimiento, aunque no se asocien a ellas.

Cuando se asocien pueden convenir la participación que les corresponderá en la administración y fiscalización de sus actividades en cuanto fuera coadyuvante a los fines perseguidos y siempre que tales convenios no restrinjan la autonomía de la cooperativa.

Cooperativas de servicios públicos únicas concesionarias

ARTICULO 20.- Cuando las cooperativas sean o lleguen a ser únicas concesionarias de servicios públicos, en las localidades donde actúen deberán prestarlos a las oficinas de las reparticiones públicas nacionales, provinciales o municipales, sin el requisito previo de asociarse y en las condiciones establecidas para sus asociados.

Derecho de información

ARTICULO 21.- Los asociados tienen libre acceso a las constancias del registro de asociados. La información sobre las constancias de los demás libros debe ser solicitada al síndico.

Retiro

ARTICULO 22.- Los asociados pueden retirarse voluntariamente en la época establecida en el estatuto, o en su defecto, al finalizar el ejercicio social dando aviso con treinta días de anticipación.

Exclusión. Apelación

ARTICULO 23.- La exclusión puede ser apelada ante la asamblea en todos los casos.

Efectos

El estatuto debe establecer los efectos del recurso.

CAPITULO IV - DEL CAPITAL Y LAS CUOTAS SOCIALES

División en cuotas sociales

ARTICULO 24.- El capital se constituye por cuotas sociales indivisibles y de igual valor.

Acciones

Las cuotas sociales deben constar en acciones representativas de una o más, que revisten el carácter de nominativas.

Transferencia

Pueden transferirse sólo entre asociados y con acuerdo del consejo de administración en las condiciones que determine el estatuto.

Integración de las cuotas sociales

ARTICULO 25.- Las cuotas sociales deben integrarse al ser suscritas, como mínimo de un cinco por ciento (5%) y completarse la integración dentro del plazo de cinco (5) años de la suscripción

Acciones. Formalidades

ARTICULO 26.- El estatuto debe establecer las formalidades de las acciones. son esenciales las siguientes:

1º. Denominación, domicilio, fecha y lugar de constitución.

- 2º. Mención de la autorización para funcionar y de las inscripciones previstas por esta ley.
- 3º. Número y valor nominal de las cuotas sociales que representan.
- 4º. Número correlativo de orden y fecha de emisión.
- 5º. Firma autógrafa del presidente, un consejero y el síndico.

El órgano local competente puede autorizar, en cada caso, el reemplazo de la firma autógrafa por impresión que garantice la autenticidad de las acciones.

Capital proporcional

ARTICULO 27.- El estatuto puede establecer un procedimiento para la formación e incremento del capital en proporción con el uso real o potencial de los servicios sociales.

Bienes aportables

ARTICULO 28.- Sólo pueden aportarse bienes determinados y susceptibles de ejecución forzada.

Aportes no dinerarios

La valuación de los aportes no dinerarios se hará en la asamblea constitutiva o, si estos se efectuaran con posterioridad, por acuerdo entre el asociado aporte y el consejo de administración, el cual debe ser sometido a la asamblea.

Los fundadores y los consejeros responden en forma solidaria e ilimitada por el mayor valor atribuido a los bienes, hasta la aprobación por la asamblea.

Si en la constitución se verifican aportes no dinerarios, estos deberán integrarse en su totalidad.

Cuando para la transferencia del aporte se requiera la inscripción en un registro, ésta se hará preventivamente a nombre de la Cooperativa en formación.

Mora en la integración. Sanciones

ARTICULO 29.- El asociado que no integre las cuotas sociales suscriptas en las condiciones previstas por el estatuto incurre en mora por el mero vencimiento del plazo y debe resarcir los daños e intereses. La mora comporta la suspensión de los derechos sociales

El estatuto puede establecer que se producirá la caducidad de los derechos. En este caso la sanción surtirá sus efectos previa intimación a integrar en un plazo no menor de quince días bajo apercibimiento de pérdida de las sumas abonadas. Sin perjuicio de ello, la cooperativa puede optar por el cumplimiento del contrato de suscripción.

Condominio. Representante

ARTICULO 30.- Si existe copropiedad de cuotas sociales se aplican las reglas del condominio. Puede exigirse la unificación de la representación para el ejercicio de determinados derechos y obligaciones sociales.

Reembolso de cuotas sociales

ARTICULO 31. El estatuto puede limitar el reembolso anual de las cuotas sociales a un monto no menor del cinco por ciento del capital integrado conforme al último balance aprobado. Los casos que no pueden ser atendidos con dicho porcentaje lo serán en los ejercicios siguientes por orden de antigüedad.

Cuotas sociales pendientes de reembolso

ARTICULO 32.- Las cuotas sociales pendientes de reembolso devengarán un interés equivalente al cincuenta por ciento de la tasa fijada por el Banco Central de la República Argentina para los depósitos en caja de ahorro.

Liquidación de cuentas

ARTICULO 33.- Ninguna liquidación definitiva en favor del asociado puede ser practicada sin haberse descontado previamente todas las deudas que tuviera con la cooperativa. Las cuotas sociales quedan afectadas como mayor garantía de las operaciones que el asociado realice.

Prenda. Embargo

ARTICULO 34.- La constitución de prenda o embargo judicial no afecta los derechos del asociado.

Reducción de capital

ARTICULO 35.- El consejo de administración, sin excluir asociados, puede ordenar en cualquier momento la reducción de capital en proporción al número de sus respectivas cuotas sociales.

Irrepartibilidad de las reservas

ARTICULO 36.- En caso de retiro, exclusión o disolución, los asociados sólo tienen derecho a que se les reembolse el valor nominal de sus cuotas sociales integradas, deducidas las pérdidas que proporcionalmente les correspondiera soportar.

CAPITULO V - DE LA CONTABILIDAD Y EL EJERCICIO SOCIAL

Contabilidad

ARTICULO 37.- La contabilidad debe ser llevada en idioma nacional y con arreglo a lo dispuesto por el artículo 43 del Código de Comercio.

Libros

ARTICULO 38.- Deben llevar, además de los libros prescriptos por el artículo 44 del Código de Comercio, los siguientes:

- 1º. Registro de asociados;
- 2º. Actas de asambleas;
- 3º. Actas de reuniones del consejo de administración;
- 4º. Informes de auditoría.

El órgano local competente puede autorizar por resolución fundada, en cada caso, el empleo de medio mecánicos y libros de hojas movibles en reemplazo o complemento de los indicados.

Rubricación

La rubricación de los libros estará a cargo del órgano local competente, si existiera, y será comunicada a la autoridad de aplicación con individualización de los libros respectivos. Esta rubricación produce los mismos efectos que la prevista por el Capítulo III, Título II, Libro Primero del Código de Comercio.

Balance

ARTICULO 39.- Anualmente se confeccionará inventario, balance general, estado de resultados y demás cuadros anexos, cuya presentación debe ajustarse a la reglamentación que dicte la autoridad de aplicación, sin perjuicio de los regímenes específicos establecidos para determinadas actividades.

Memoria

ARTICULO 40.- La memoria anual del consejo de administración debe contener una descripción del estado de la cooperativa con mención de las diferentes secciones en que opera, actividad registrada y los proyectos en curso de ejecución. Hará especial referencia a:

- 1º. Los gastos e ingresos cuando no estuvieran discriminados en estado de resultados u otros cuadros anexos;
- 2º. La relación económico social con la cooperativa de grado superior a que estuviera asociada, con mención del porcentaje de operaciones en su caso;
- 3º. Las sumas invertidas en educación y capacitación cooperativas, con indicación de la labor desarrollada o mención de la cooperativa de grado superior o institución especializada a la cual se remitieron los fondos respectivos para tales fines.

Documentos. Remisión

ARTICULO 41.- Copias del balance general, estado de resultados y cuadros anexos, juntamente con la memoria, y acompañados de los informes del síndico y del auditor y

demás documentos, deben ser puestos a disposición de los asociados en la sede, sucursales y cualquier otra especie de representación permanente, y remitidos a la autoridad de aplicación y al órgano local competente con no menos de quince días de anticipación a la realización de la asamblea que los considerará.

En caso de que dichos documentos fueran modificados por la asamblea, se remitirán también copias de los definitivos a la autoridad de aplicación y órgano local competente dentro de los treinta días.

Excedentes repartibles. Concepto

ARTICULO 42.- Se consideran excedentes repartibles sólo aquellos que provengan de la diferencia entre el costo y el precio del servicio prestado a los asociados.

Distribución

De los excedentes repartibles se destinará:

- 1º. El cinco por ciento a reserva legal;
- 2º. El cinco por ciento al fondo de acción asistencial y laboral o para estímulo del personal;
- 3º. El cinco por ciento al fondo de educación y capacitación cooperativas;
- 4º. Una suma indeterminada para pagar un interés a las cuotas sociales si lo autoriza el estatuto, el cual no puede exceder en más de un punto al que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento;
- 5º. El resto para su distribución entre los asociados en concepto de retorno;
 - a) en las cooperativas o secciones de consumo de bienes o servicios, en proporción al consumo hecho por cada asociado;
 - b) en las cooperativas de producción o trabajo, en proporción al trabajo efectivamente prestado por cada uno;
 - c) en las cooperativas o secciones de adquisición de elementos de trabajo, de transformación y de comercialización de productos en estado natural o elaborados, en proporción al monto de las operaciones realizadas por cada asociado;
 - d) en las cooperativas o secciones de crédito, en proporción al capital aportado o a los servicios utilizados, según establezca el estatuto;
 - e) en las demás cooperativas o secciones, en proporción a las operaciones realizadas o a los servicios utilizados por cada asociado.

Destino de excedentes generados por prestación de servicios a no Asociados

Los excedentes que deriven de la prestación de servicios a no asociados autorizada por esta ley se destinarán a una cuenta especial de reserva.

Seccionalización de resultados. Compensación de quebrantos

ARTICULO 43.- Los resultados deben determinarse por secciones y no podrán distribuirse excedentes sin compensar previamente los quebrantos de las que hubieran arrojado pérdida. Cuando se hubieran utilizado reservas para compensar quebrantos, no se podrán distribuir excedentes sin haberlas reconstituido al nivel anterior a su utilización. Tampoco podrán distribuirse excedentes sin haber compensado las pérdidas de ejercicios anteriores.

Distribución de excedentes en cuotas sociales

ARTICULO 44.- La asamblea puede resolver que el retorno, y los intereses en su caso, se distribuyan total o parcialmente en cuotas sociales.

Revalúo de activos

ARTICULO 45.- Las cooperativas pueden revaluar sus activos de acuerdo con la reglamentación que dicte la autoridad de aplicación

Educación y capacitación cooperativas

ARTICULO 46.- Deben invertir anualmente el fondo de educación y capacitación cooperativas previsto por el artículo 42 inciso 3, ya sea directamente o a través de cooperativas de grado superior o de instituciones especializadas con personería jurídica.

CAPITULO VI - DE LAS ASAMBLEAS

Clases

ARTICULO 47.- Las asambleas son ordinarias o extraordinarias.

Asamblea ordinaria

La asamblea ordinaria debe realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio para considerar los documentos mencionados en el artículo 41 y elegir consejeros y síndico, sin perjuicio de los demás asuntos incluidos en el orden del día.

Asambleas extraordinarias

Las asambleas extraordinarias tendrán lugar toda vez que lo disponga el consejo de administración; el síndico, conforme a lo previsto por el artículo 79 inciso 2, o cuando lo soliciten asociados cuyo número equivalga por lo menos al diez por ciento del total, salvo que el estatuto exigiera un porcentaje menor. Se realizarán dentro del plazo previsto por el estatuto.

El consejo de administración puede denegar el pedido incorporado los asuntos que lo motivan al orden del día de la asamblea ordinaria, cuando ésta se realice dentro de los noventa días de la fecha de presentación de la solicitud.

Convocatoria

ARTICULO 48.- Deben ser convocadas con quince días de anticipación por lo menos, en la forma prevista por el estatuto. La convocatoria incluirá el orden del día a considerar.

Comunicación

Con la misma anticipación deben ser comunicadas a la autoridad de aplicación y al órgano local competente.

Lugar de reunión

Deben reunirse en la sede o en lugar que corresponda a la jurisdicción del domicilio social.

Quórum

ARTICULO 49.- Se realizan válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados.

Asamblea de delegados

ARTICULO 50.- Cuando el número de asociados pase de cinco mil, la asamblea será constituida por delegados elegidos en asambleas electorales de distrito en las condiciones que determinen el estatuto y el reglamento. Puede establecerse la división de los distritos en secciones a fin de facilitar el ejercicio de los derechos electorales a los asociados.

Asambleas de distrito. Duración del cargo de los delegados

Las asambleas de distrito se realizarán al solo efecto de elegir delegados por simple mayoría de votos. El cargo se considerará vigente hasta la siguiente asamblea ordinaria, salvo que el estatuto lo limite a menor tiempo.

Asociados domiciliados o residentes en lugares distantes

Igual procedimiento puede adoptar el estatuto, aunque el número de asociados sea inferior al indicado, para la representación de los domiciliados o residentes en lugares distantes del de la asamblea, sobre la base de un régimen de igualdad para todos los distritos.

Credenciales

Previamente a su constitución definitiva la asamblea debe pronunciarse sobre las credenciales de los delegados presentes.

Voto por poder. Condiciones

ARTICULO 51.- SE puede votar por poder, salvo que el estatuto lo prohíba. El mandato debe recaer en un asociado y éste no puede representar a más de dos.

Orden del día. Efectos

ARTICULO 52.- Es nula toda decisión sobre materias extrañas a las incluidas en el orden del día, salvo la elección de los encargados de suscribir el acta.

Mayoría

ARTICULO 53.- Las resoluciones se adoptan por simple mayoría de los presentes en el momento de la votación, salvo las previsiones de la ley o el estatuto para decisiones que requieran mayor número.

Casos especiales

Es necesaria la mayoría de los dos tercios de los asociados presentes en el momento de la votación para resolver el cambio del objeto social, la fusión o incorporación y la disolución.

Participación de consejeros, síndicos, gerentes y auditores

ARTICULO 54.- Los consejeros, síndicos, gerentes y auditores tienen voz en las asambleas, pero no pueden votar sobre la memoria, el balance y demás asuntos relacionados con su gestión ni acerca de las resoluciones referentes a su responsabilidad. Tampoco podrán representar a otros asociados.

Firma del acta

ARTICULO 55.- La asamblea debe designar a dos de sus miembros para aprobar y firmar el acta respectiva conjuntamente con las autoridades indicadas por el estatuto.

Copias

Cualquier asociado puede solicitar, a su costa, copia del acta.

Remisión

ARTICULO 56.- Debe remitirse copia del acta a la autoridad de aplicación y al órgano local competente dentro del plazo y con la documentación previstos en el segundo párrafo del artículo 41.

Cuarto intermedio

ARTICULO 57.- Una vez constituida la asamblea debe considerar todos los asuntos incluidos en el orden del día, sin perjuicio de pasar a cuarto intermedio una o más veces dentro de un plazo total de treinta días, especificando en cada caso día, hora y lugar de reanudación. Dicho plazo puede ser ampliado por la autoridad de aplicación cuando las circunstancias lo aconseje.
Se confeccionará acta de cada reunión.

Competencia

ARTICULO 58.- Es de competencia exclusiva de la asamblea, siempre que el asunto figure en el orden del día, la consideración de:

- 1º. Memoria, balance general, estado de resultados y demás cuadros anexos;
- 2º. Informes del síndico y del auditor;
- 3º. Distribución de excedentes;
- 4º. Fusión o incorporación;
- 5º. Disolución;
- 6º. Cambio del objeto social;
- 7º. Participación de personas jurídicas de carácter público, entes descentralizados y empresas del Estado en los términos del último párrafo del artículo 19;
- 8º. Asociación con personas de otro carácter jurídico.

Reserva del estatuto

El estatuto puede disponer que otras resoluciones, además de las indicadas, queden reservadas a la competencia exclusiva de la asamblea.

Remoción de consejeros y síndicos

ARTICULO 59.- Los consejeros y síndicos pueden ser removidos en cualquier tiempo por resolución de la asamblea. Esta puede ser adoptada aunque no figure en el orden del día, si es consecuencia directa de asunto incluido en él.

Receso

ARTICULO 60.- El cambio sustancial del objeto social da lugar al derecho de receso, el cual podrá ejercerse por quienes no votaron favorablemente, dentro del quinto día, y por los ausentes, dentro de los treinta días de la clausura de la asamblea.

Reemplazo de las cuotas sociales

El reembolso de las cuotas sociales por esta causa se efectuará dentro de los noventa días de notificada la voluntad de receso. No rige en este caso la limitación autorizada por el artículo 31.

Obligatoriedad de las decisiones

ARTICULO 61.- Las decisiones de la asamblea conformes con la ley el estatuto y el reglamento, son obligatorias para todos los asociados, salvo lo dispuesto en el artículo anterior.

Impugnación de las decisiones asamblearias. Titulares

ARTICULO 62.- Toda resolución de la asamblea que sea violatoria de la ley, el estatuto o el reglamento, puede ser impugnada de nulidad por consejeros, síndicos, autoridad de aplicación, órgano local competente y asociados ausentes o que no votaron favorablemente.

También podrán impugnarla quienes votaron favorablemente, si su voto es anulable por vicios de la voluntad o la norma violada es de orden público.

Ejercicio de la acción

La acción se promoverá contra la cooperativa por ante el juez competente, dentro de los noventa días de la clausura de la asamblea.

CAPITULO VII - DE LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION

Consejo de administración. Elección. Composición

ARTICULO 63.- El consejo de administración es elegido por la asamblea con la periodicidad, forma y número previstos en el estatuto. Los consejeros deben ser asociados y no menos de tres.

Duración del cargo

La duración del cargo de consejero no puede exceder de tres ejercicios.

Reelegibilidad

Los consejeros son reelegibles, salvo prohibición expresa del estatuto.

Prohibiciones e incompatibilidades

ARTICULO 64.- No pueden ser consejeros:

1º. Los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta, hasta diez años después de su rehabilitación; los fallidos por quiebra casual o los concursados, hasta cinco años después de su rehabilitación; los directores o administradores de sociedad cuya conducta se calificare de culpable o fraudulenta, hasta diez años después de su rehabilitación;

2º. Los condenados con accesoria de inhabilitación de ejercer cargos públicos; los condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos, delitos contra la fe pública; los condenados por delitos cometidos en la constitución, funcionamiento y liquidación de sociedades. En todos los casos hasta diez años después de cumplida la condena;

3º. Las personas que perciban sueldo, honorarios o comisiones de la cooperativa, excepto en las de producción o trabajo y salvo lo previsto en el artículo 67.

Reemplazo de los consejeros

ARTICULO 65.- El estatuto puede establecer la elección de suplentes para subsanar la falta de consejeros por cualquier causa. Salvo disposición contraria, el cargo de los suplentes que pasaran a reemplazar a titulares durará hasta la primera asamblea ordinaria.

Silencio del estatuto o vacancia

En caso de silencio del estatuto o vacancia, el síndico designará los reemplazantes hasta la reunión de la primera asamblea.

Renuncia

ARTICULO 66.- La renuncia debe ser presentada al consejo de administración y éste podrá aceptarla siempre que no afectara su regular funcionamiento. En caso contrario, el renunciante deberá continuar en funciones hasta tanto la asamblea se pronuncie.

Remuneración

ARTICULO 67.- Por resolución de la asamblea puede ser retribuido el trabajo personal realizado por los consejeros en el cumplimiento de la actividad institucional.

Reembolso de gastos

Los gastos efectuados en el ejercicio del cargo serán reembolsados.

Funciones

ARTICULO 68.- El consejo de administración tiene a su cargo la dirección de las operaciones sociales, dentro de los límites que fije el estatuto, con aplicación supletoria de las normas del mandato.

Atribuciones

Sus atribuciones son las explícitamente asignadas por el estatuto y las indicadas para la realización del objeto social. A este efecto se consideran facultades implícitas las que la ley o el estatuto no reservaran expresamente a la asamblea.

Reglas de funcionamiento

ARTICULO 69.- El estatuto debe establecer las reglas de funcionamiento del consejo de administración.

Quórum

El quórum será de más de la mitad de los consejeros, por lo menos. Actas Las actas deben ser firmadas por el presidente y un consejero.

Reuniones. Convocatoria

ARTICULO 70.- Debe reunirse por lo menos una vez al mes y cuando lo requiera cualquiera de sus miembros. La convocatoria se hará en este último caso por el presidente para reunirse dentro del sexto día de recibido el pedido. En su defecto podrá convocarlo cualquiera de los consejeros.

Comité ejecutivo

ARTICULO 71.- El estatuto o el reglamento pueden instituir un comité ejecutivo o mesa directiva, integrados por consejeros, para asegurar la continuidad de la gestión ordinaria. Esta institución no modifica las obligaciones y responsabilidades de los consejeros.

Gerentes

ARTICULO 72.- El consejo de administración puede designar gerentes, a quienes puede encomendar las funciones ejecutivas de la administración. Responden ante la cooperativa y los terceros por el desempeño de su cargo en la misma extensión y forma que los consejeros. Su designación no excluye la responsabilidad de aquellos.

Representación

ARTICULO 73.- La representación corresponde al presidente del consejo de administración. El estatuto puede, no obstante, autorizar la actuación de uno o más consejeros. En ambos supuestos obligan a la cooperativa por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Este régimen se aplica aun en infracción de la representación plural, si se tratara de obligaciones contraídas mediante títulos, valores, por contratos entre ausentes, de adhesión o concluidos mediante formularios, salvo cuando el tercero tuviera conocimiento efectivo de que el acto se celebra en infracción de la representación plural.

Esta consecuencia legal respecto de los terceros no afecta la validez interna de las restricciones estatutarias y la responsabilidad por su infracción.

Responsabilidad de los consejeros. Exención

ARTICULO 74.- Los consejeros sólo pueden ser eximidos de responsabilidad por violación de la ley, el estatuto o el reglamento, mediante la prueba de no haber participado en la reunión que adoptó la resolución impugnada o la constancia en acta de su voto en contra.

Uso de los servicios sociales

ARTICULO 75.- El consejero puede hacer uso de los servicios sociales en igualdad de condiciones con los demás asociados.

Interés contrario

Cuando en una operación determinada tuviera un interés contrario al de la cooperativa deberá hacerlo saber al consejo de administración y al síndico y abstenerse de intervenir en la deliberación y la votación.

Actividades en competencia

No puede efectuar operaciones por cuenta propia o de terceros en competencia con la cooperativa.

CAPITULO VIII - DE LA FISCALIZACION PRIVADA

Organo. Calidad

ARTICULO 76.- La fiscalización privada está a cargo de uno o más síndicos elegidos por la asamblea entre los asociados. Se elegirá un número no menor de suplentes.

Duración del cargo

La duración del cargo no puede exceder de tres ejercicios.

Reelegibilidad

Son reelegibles si lo autoriza el estatuto.

Comisión fiscalizadora

Cuando el estatuto previera más de un síndico debe fijar un número impar. En tal caso actuarán como cuerpo colegiado bajo la denominación de "Comisión fiscalizadora". El estatuto debe reglar su constitución y funcionamiento. Llevará un libro de actas.

Inhabilidades e incompatibilidades

ARTICULO 77.- No pueden ser síndicos:

1º. Quienes se hallen inhabilitados para ser consejeros conforme el artículo 64;

2º. Los cónyuges y los parientes de los consejeros y gerentes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive.

Remisión a otras normas

ARTICULO 78.- Rigen para los síndicos las disposiciones de los artículos 67 y 75.

Atribuciones

ARTICULO 79.- Son atribuciones del síndico, sin perjuicio de las que conforme a sus funciones le confieren la ley y el estatuto:

- 1º. Fiscalizar la administración, a cuyo efecto examinará los libros y documentos siempre que lo juzgue conveniente;
- 2º. Convocar, previo requerimiento al consejo de administración, a asamblea extraordinaria cuando lo juzgue necesario; y a asamblea ordinaria cuando omitiera hacerlo dicho órgano una vez vencido el plazo de ley;
- 3º. Verificar periódicamente el estado de caja y la existencia de títulos y valores de todo especie;
- 4º. Asistir con voz a las reuniones del consejo de administración;
- 5º. Verificar y facilitar el ejercicio de los derechos de los asociados;
- 6º. Informar por escrito sobre todos los documentos presentados por el consejo de administración a la asamblea ordinaria;
- 7º. Hacer incluir en el orden del día de la asamblea los puntos que considere procedentes;
- 8º. Designar consejeros en los casos previstos en el último párrafo del artículo 65;
- 9º. Vigilar las operaciones de liquidación;
- 10º.- En general, velar por que el consejo de administración cumpla la ley, el estatuto, el reglamento y las resoluciones asamblearias.

El síndico debe ejercer sus funciones de modo que no entorpezca la regularidad de la administración social. La función de fiscalización se limita al derecho de observación cuando las decisiones significaran, según su concepto, infracción de la ley el estatuto o el reglamento.

Para que la impugnación sea procedente debe, en cada caso, especificar concretamente las disposiciones que considere transgredidas.

Responsabilidad

ARTICULO 80.- El síndico responde por el incumplimiento de las obligaciones que le imponen la ley y el estatuto.

Actuación documentada

Tiene el deber de documentar sus observaciones o requerimientos y, agotada la gestión interna, informar de los hechos a la autoridad de aplicación, y al órgano local competente. La constancia de su informe cubre la responsabilidad de fiscalización.

Auditoría

ARTICULO 81.- Las cooperativas deben contar desde su constitución y hasta que finalice su liquidación con un servicio de auditoría externa a cargo de contador público nacional inscripto en la matrícula respectiva.

El servicio de auditoría puede ser prestado por cooperativa de grado superior o entidad especialmente constituida a este fin.

Cuando la cooperativa lo solicite y su condición económica lo justifique la auditoría será realizada por el órgano local competente. En este caso el servicio será gratuito y la cooperativa estará exenta de responsabilidad si no fuera prestado.

La auditoría puede ser desempeñada por el síndico cuando éste tuviera la calidad profesional indicada.

Libro especial

Los informes de auditoría se confeccionarán de acuerdo con la reglamentación que dicte la autoridad de aplicación, serán por lo menos trimestrales y se asentarán en el libro especial previsto en el artículo 38 inciso 4.

CAPITULO IX - DE LA INTEGRACION

Asociación entre cooperativas

ARTICULO 82.- Las cooperativas pueden asociarse entre sí para el mejor cumplimiento de sus fines.

Fusión e incorporación

ARTICULO 83.- Pueden fusión o incorporarse cuando sus objetos sociales fuesen comunes o complementarios.

Fusión

Cuando dos o más cooperativas se fusionan, se disuelven sin liquidarse y les será retirada la autorización para funcionar y canceladas sus respectivas inscripciones. La

nueva cooperativa se constituirá de acuerdo con las disposiciones de esta ley y se hará cargo del patrimonio de las disueltas.

Incorporación

En caso de incorporación, las incorporadas se disuelven sin liquidarse. El patrimonio de éstas se transfiere a la incorporante.

Operaciones en común

ARTICULO 84.- Las cooperativas pueden convenir la realización de una o más operaciones en común, determinando cuál de ellas será la representante de la gestión y asumirá la responsabilidad frente a terceros.

Integración federativa

ARTICULO 85.- Por resolución de la asamblea, o del consejo de administración ad-referendum de ella, pueden integrarse en cooperativas de grado superior para el cumplimiento de objetivos económicos, culturales o sociales.

Régimen

Las cooperativas de grado superior se rigen por las disposiciones de la presente ley con las modificaciones de este artículo y las que resultan de su naturaleza.

Número mínimo de asociadas

Deben tener un mínimo de siete asociadas.

Representación y voto

El estatuto debe establecer el régimen de representación y voto, que podrá ser proporcional al número de asociados, al volumen de operaciones o a ambos, a condición de fijar un mínimo y un máximo que aseguren la participación de todas las asociadas e impidan el predominio excluyente de alguna de ellas.

CAPITULO X - DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION

Causas de disolución

ARTICULO 86.- Procede la disolución:

- 1º. Por decisión de la Asamblea;
- 2º. Por reducción del número de asociados por debajo del mínimo legal o del admitido por la autoridad de aplicación. La disolución procederá siempre que la reducción se prolongue durante un lapso superior a seis meses;
- 3º. Por declaración en quiebra. La disolución quedará sin efecto si se celebrara avenimiento o concordato resolutorio;
- 4º. Por fusión o incorporación en los términos del artículo 83;
- 5º. Por retiro de la autorización para funcionar, previsto por el artículo 101 inciso 4.;
- 6º. Cuando corresponda en virtud de otras disposiciones legales.

Efectos de la disolución

ARTICULO 87.- Disuelta la cooperativa se procederá inmediatamente a su liquidación, salvo en los casos previstos por el artículo 83. La cooperativa en liquidación conserva su personalidad a ese efecto.

Organo liquidador

ARTICULO 88.- La liquidación está a cargo del consejo de administración, salvo disposición en contrario del estatuto y lo previsto por regímenes específicos establecidos para determinadas actividades. En su defecto, el liquidador o los liquidadores serán designados por la asamblea dentro de los treinta días de haber entrado la cooperativa en estado de liquidación. No designados los liquidadores, o si estos no desempeñaran el cargo, cualquier asociado podrá solicitar al juez competente el nombramiento omitido o una nueva elección, según corresponda.

Comunicación del nombramiento de los liquidadores

ARTICULO 89.- Debe comunicarse a la autoridad de aplicación y al órgano local competente el nombramiento de los liquidadores dentro de los quince días de haberse producido.

Remoción de los liquidadores

ARTICULO 90.- Los liquidadores pueden ser removidos por la asamblea con la misma mayoría requerida para su designación. Cualquier asociado o el síndico pueden demandar la remoción judicial por justa causa.

Inventario y balance

ARTICULO 91.- Los liquidadores están obligados a confeccionar, dentro de los treinta días de asumido el cargo, un inventario y balance del patrimonio social, que someterán a la asamblea dentro de los treinta días subsiguientes.

La autoridad de aplicación puede extender dichos plazos por otros treinta días.

Obligación de informar

ARTICULO 92.- Los liquidadores deben informar al síndico, por lo menos trimestralmente, sobre el estado de la liquidación. Si la liquidación se prolongara, se confeccionarán además balances anuales.

Facultades y responsabilidad

ARTICULO 93.- Los liquidadores ejercen la representación de la cooperativa. Están facultados para efectuar todos los actos necesarios para la realización del activo y cancelación del pasivo con arreglo a las instrucciones de la asamblea, bajo pena de incurrir en responsabilidad por los daños y perjuicios causados por su incumplimiento.

Actuación

Actuarán empleando la denominación social con el aditamento "en liquidación", cuya omisión los hará ilimitada solidariamente responsables por los daños y perjuicios.

Remisión a otras normas

Las obligaciones y la responsabilidad de los liquidadores se rigen por las disposiciones establecidas para el consejo de administración en lo que no estuviera previsto en este capítulo.

Balance final

ARTICULO 94.- Extinguido el pasivo social los liquidadores confeccionarán el balance final, el cual será sometido a la asamblea con informes del síndico y del auditor. Los asociados disidentes o ausentes podrán impugnarlo judicialmente dentro de los sesenta días contados desde la aprobación por la asamblea.

Comunicación

Se remitirán copias a la autoridad de aplicación y al órgano local competente dentro de los treinta días de su aprobación.

Reembolso de cuotas sociales

Aprobado el balance final se reembolsará el valor nominal de las cuotas sociales, deducida la parte proporcional de los quebrantos, si los hubiera.

Destino del sobrante patrimonial

ARTICULO 95.- El sobrante patrimonial que resultara de la liquidación tendrá el destino previsto en el último párrafo del artículo 101.

Concepto

Se entiende por sobrante patrimonial el remanente total de los bienes sociales una vez pagadas las deudas y devuelto el valor nominal de las cuotas sociales.

Importes no reclamados

ARTICULO 96.- Los importes no reclamados dentro de los noventa días de finalizada la liquidación se depositarán en un banco oficial o cooperativo a disposición de sus titulares. Transcurridos tres años sin ser retirados tendrán el destino previsto en el último párrafo del artículo 101.

Cancelación de la inscripción

ARTICULO 97.- Terminada la liquidación se cancelará la inscripción prevista por esta ley.

Libros y demás documentación

ARTICULO 98.- En defecto de acuerdo entre los asociados, el juez competente decidirá quien conservará los libros y demás documentos sociales.

CAPITULO XI - DE LA FISCALIZACION PUBLICA

Organo

ARTICULO 99.- La fiscalización pública está a cargo de la autoridad de aplicación, que la ejercerá por sí o a través de convenio con el órgano local competente.

Fiscalización especial

La fiscalización prevista en esta ley es sin perjuicio de la que establezcan regímenes específicos para determinadas actividades.

Facultades

ARTICULO 100.- Son facultades inherentes a la fiscalización pública:

- 1º. Requerir la documentación que se estime necesaria;
- 2º. Realizar investigaciones e inspecciones en las cooperativas, a cuyo efecto se podrá examinar sus libros y documentos y pedir informaciones a sus autoridades, funcionarios responsables, auditores, personal y terceros;
- 3º. Asistir a las asambleas;
- 4º. Convocar a asamblea cuando lo soliciten asociados cuyo número equivalga por lo menos al diez por ciento del total, salvo que el estatuto requiriera un porcentaje menor, si el consejo de administración no hubiese dado cumplimiento a las disposiciones estatutarias pertinentes en los plazos previstos por ellas o hubiera denegado infundadamente el pedido;
- 5º. Convocar de oficio a asambleas cuando se constatarán irregularidades graves y se estimara la medida imprescindible para normalizar el funcionamiento de la cooperativa;
- 6º. Impedir el uso indebido de la denominación "cooperativa" de acuerdo con las previsiones de esta ley;
- 7º. Formular denuncias ante las autoridades policiales o judiciales en los casos en que pudiera corresponder el ejercicio de la acción pública;
- 8º. Hacer cumplir sus decisiones, a cuyo efecto se pondrá:
 - a) requerir el auxilio de la fuerza pública;
 - b) solicitar el allanamiento de domicilios y la clausura de locales;
 - c) pedir el secuestro de libros y documentación social;
- 9º. Declarar irregulares e ineficaces, a los efectos administrativos, los actos a ella sometidos cuando sean contrarios a la ley, el estatuto o el reglamento. La declaración de irregularidad podrá importar el requerimiento de las medidas previstas en el inciso siguiente, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el artículo 101;
10. Solicitar al juez competente:
 - a) la suspensión de las resoluciones de los órganos sociales cuando fueran contrarias a la ley, el estatuto o el reglamento;
 - b) la intervención de la cooperativa cuando sus órganos realicen actos o incurran en omisiones que importen un riesgo grave para su existencia;
11. Vigilar las operaciones de liquidación;
12. Coordinar su labor con los organismos competentes por razón de materia;
13. En general, velar por el estricto cumplimiento de las leyes en toda materia incluida en su ámbito, cuidando de no entorpecer la regular administración de las cooperativas.

Sanciones

ARTICULO 101.- En caso de infracción a la presente ley, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia, las cooperativas se harán pasibles de las siguientes sanciones:

1. Apercibimiento

2. Multa de pesos cuatro millones (\$4.000.000) a pesos cuatrocientos millones (\$400.000.000)

En el caso de reincidencia la multa podrá alcanzar hasta el triple del importe máximo.

Se considera reincidente quien dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de la infracción haya sido sancionado por otra infracción.

Los montos de las multas serán actualizados semestralmente por la autoridad de aplicación del régimen legal de cooperativas, sobre la base de la variación del índice de precios al por mayor, nivel general, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

3. Retiro de autorización para funcionar

No pueden ser sancionadas sin previa instrucción de sumario, procedimiento en el cual tendrán oportunidad de conocer la imputación, realizar los descargos, ofrecer la prueba y alegar la producida.

Las sanciones se graduarán teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, los antecedentes de la imputada, su importancia social o económica y, en su caso los perjuicios causados.

Las sanciones de los incs. 1 y 2 pueden ser materia de los convenios previstos por el art. 99 quedando reservada a la autoridad de aplicación la sanción del inc. 3.

Destino de las multas

El importe de las multas ingresará a los recursos del organismo instituido en el capítulo XII o del fisco provincial, según el domicilio de la cooperativa, con destino a promoción del cooperativismo.

ARTICULO 102.- El uso indebido de la palabra "cooperativa" en la denominación de cualquier entidad, con posterioridad a la fecha de publicación de esta ley, será penado con multa de pesos cuatro millones (\$4.000.000) a pesos cuatrocientos millones (\$400.000.000) que serán actualizados en los plazos y forma previstos en el inc. 2 del art. 101. Se procederá, además, a la clausura del establecimiento, oficinas, locales y demás dependencias de la infractora mientras no suprima el uso de la palabra "cooperativa".

Esta sanción puede ser materia de los convenios previstos por el artículo 99 y se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 101.

El importe de la multa tendrá el destino previsto en el último párrafo del artículo anterior.

Recursos contra decisiones que apliquen sanciones

ARTICULO 103.- Todas las sanciones pueden ser recurridas administrativamente.

Recurso judicial

Sólo las multas y la sanción contemplada en el artículo 101 inciso 4º. pueden impugnarse por vía de recurso judicial, que tendrá efecto suspensivo. Cuando se trate de sanciones impuestas por la autoridad de aplicación será competente la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Cuando se trate de multas impuestas por el órgano local entenderá el tribunal de la jurisdicción competente en la materia.

El recurso se interpondrá fundadamente dentro de los treinta (30) días hábiles de notificada la resolución y deberá ser elevado al tribunal con sus respectivos antecedentes dentro del quinto día hábil. En el caso de sanciones impuestas por la autoridad de aplicación el recurso puede interponerse ante ella o ante el órgano local competente, que lo remitirá a aquélla dentro del quinto día hábil.

Supuesto especial

En el caso de aplicarse la sanción prevista por el artículo 101 inciso 4º., y hasta tanto haya sentencia firme, la autoridad de aplicación podrá requerir judicialmente la intervención de la cooperativa y la sustitución de los órganos sociales en sus facultades de administración.

Fiscalización por autoridad concedente

ARTICULO 104.- Las cooperativas que tengan a su cargo concesiones de servicios públicos, o permisos que signifiquen autorización exclusiva o preferencial, podrán ser fiscalizadas por la autoridad respectiva. Esta fiscalización se limitará a vigilar el cumplimiento de las condiciones de la concesión o el permiso y de las obligaciones estipuladas en favor del público. Los fiscalizadores podrán asistir a las reuniones del consejo de administración y a las asambleas y hacer constar en acta sus observaciones, debiendo informar a la autoridad respectiva sobre cualquier falta que advirtieran. Deben ejercer sus funciones cuidando de no entorpecer la regularidad de la administración y los servicios sociales.

CAPITULO XII - DEL INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA

Carácter. Fin principal. Ambito de actuación *

ARTICULO 105.- El Instituto Nacional de Acción Cooperativa es la autoridad de aplicación del régimen legal de las cooperativas y tiene por fin principal concurrir a su promoción y desarrollo.

Funcionará como organismo descentralizado del Ministerio de Bienestar Social, con ámbito de actuación nacional, de conformidad con los términos de esta ley.

Es órgano local competente en la Capital Federal y demás lugares de jurisdicción nacional.

Funciones

ARTICULO 106.- Ejerce las siguientes funciones:

1º. Autorizar a funcionar a las cooperativas en todo el territorio de la Nación, llevando el registro correspondiente.

2º. Ejercer con el mismo alcance la fiscalización pública, por sí o a través de convenio con el órgano local competente conforme con el artículo 99;

3º. Asistir y asesorar técnicamente a las cooperativas y a las instituciones públicas y privadas en general, en los aspectos económico, social, jurídico, educativo, organizativo, financiero y contable, vinculados con la materia de su competencia;

4º. Apoyar económica y financieramente a las cooperativas y a las instituciones culturales que realicen actividades afines, por vía de préstamos de fomento o subsidios, y ejercer el control pertinente en relación con los apoyos acordados;

5º. Gestionar ante los organismos públicos de cualquier jurisdicción y ante las organizaciones representativas del movimiento cooperativo y centros de estudio, investigación y difusión, la adopción de medidas y la formulación de planes y programas que sirvan a los fines de esta ley, a cuyo efecto podrá celebrar acuerdos;

6º. Promover el perfeccionamiento de la legislación sobre cooperativas.

7º. Realizar estudios e investigaciones de carácter jurídico, económico, social, organizativo y contable sobre la materia de su competencia, organizando cursos, conferencias y publicaciones y colaborando con otros organismos públicos y privados;

8º. Dictar reglamentos sobre la materia de su competencia y proponer al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Bienestar Social, la sanción de las normas que por su naturaleza excedan sus facultades;

9º. Establecer un servicio estadístico y de información para y sobre el movimiento cooperativo.

Apoyo a los sectores menos desarrollados

ARTICULO 107.- Prestará especial apoyo técnico y financiero a los sectores menos desarrollados del movimiento cooperativo, considerando prioritariamente las limitaciones socioeconómicas de los asociados, las necesidades regionales a que respondan los proyectos cooperativos y la gravitación sectorial de estos.

Atribuciones

ARTICULO 108.- Corresponde al Instituto Nacional de Acción Cooperativa:

1º. Administrar sus recursos;

2º. Dictar su reglamento interno y el correspondiente al Consejo Consultivo Honorario;

3º. Proyectar y elevar su estructura orgánico-funcional y dotación de personal;

4º. Proyectar su presupuesto anual de gastos, cálculo de recursos y cuenta de inversiones y redactar la memoria anual.

Directorio. Composición

ARTICULO 109.- Será conducido y administrado por un directorio formado por un presidente y cuatro vocales designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Bienestar Social, que durarán cuatro años en sus cargos. Dos de los vocales serán designados de las ternas elevadas por las organizaciones más representativas del movimiento cooperativo, con arreglo a la pertinente reglamentación.

Deberes y atribuciones del presidente

ARTICULO 110.- El presidente representa al Instituto Nacional de Acción Cooperativa en todos sus actos y debe:

- 1º. Observar y hacer observar esta ley y las disposiciones reglamentarias;
- 2º. Ejecutar las resoluciones del organismo y velar por su cumplimiento, pudiendo delegar funciones en los demás miembros del directorio y en funcionarios de su dependencia;
- 3º. Convocar y presidir las reuniones del directorio y del consejo consultivo honorario.

Consejo Consultivo Honorario

ARTICULO 111.- El Instituto Nacional de Acción Cooperativa contará con un consejo consultivo honorario en el que estarán representados los ministerios y otros organismos oficiales que entiendan en las actividades que realicen las cooperativas, así como las organizaciones más representativas del movimiento cooperativo, de conformidad con la reglamentación respectiva.

Competencia

ARTICULO 112.- El consejo consultivo honorario debe ser convocado para el tratamiento de todos aquellos asuntos que por su trascendencia requieran su opinión, y en especial:

- 1º. Proyectos de reforma del régimen legal de las cooperativas;
- 2º. Distribución de los recursos del Instituto Nacional de Acción Cooperativa que se destinen a préstamos de fomento o subsidios;
- 3º. Determinación de planes de acción generales, regionales o sectoriales.

Recursos

ARTICULO 113.- El Instituto Nacional de Acción Cooperativa contará con los siguientes recursos:

- 1º. Las sumas que fije el presupuesto general de la Nación y las que se le acuerden por leyes especiales;
- 2º. Los créditos que le asignen organismos nacionales, provinciales y municipales;
- 3º. Las donaciones, legados, subsidios y subvenciones;
- 4º. El reintegro de los préstamos y sus intereses;
- 5º. Los saldos no usados de ejercicios anteriores;
- 6º. El importe de las multas aplicadas conforme con las disposiciones de esta ley;
- 7º. Las sumas provenientes de lo dispuesto por los artículo 95 y 96;
- 8º. Los depósitos previstos en el artículo 9, transcurrido un año desde la última actuación.

CAPITULO XIII - DISPOSICIONES VARIAS Y TRANSITORIAS

Cooperativas escolares

ARTICULO 114.- Las cooperativas escolares, integradas por escolares y estudiantes menores de dieciocho años, se rigen por las disposiciones que dicte la autoridad de educación competente, de conformidad con los principios de esta ley.

Préstamos en dinero

ARTICULO 115.- Cuando las cooperativas efectúen préstamos en dinero a sus asociados no podrán percibir a título de premio, prima o con otro nombre, suma alguna que reduzca la cantidad efectivamente prestada a menos del monto nominal del préstamo, salvo el descuento por intereses si así se hubiera establecido, y sin perjuicio de lo que corresponda al asociado abonar por el costo administrativo del servicio según el reglamento respectivo. El interés no puede exceder en más de un punto de la tasa efectiva cobrada por los bancos en operaciones semejantes y el descuento por el costo administrativo no será superior a un quinto de la tasa de interés cobrada. Los préstamos pueden ser cancelados en cualquier momento sin recargo alguno de interés.

Excepción

Esta disposición no rige para las cooperativas que funcionen dentro del régimen de la Ley No. 18.061.

Bancos cooperativos y cajas de crédito cooperativas

ARTICULO 116.- Los bancos cooperativos y las cajas de crédito cooperativas pueden recibir fondos de terceros en las condiciones que prevea el régimen legal de las entidades financieras.

Organo local competente

ARTICULO 117.- El órgano local competente a que alude esta ley es el que cada provincia establezca para entender en materia cooperativa en su respectiva jurisdicción.

Aplicación supletoria

ARTICULO 118.- Para las cooperativas rigen supletoriamente las disposiciones del Capítulo II, Sección V, de la Ley 19.550, en cuando se concilien con las de esta ley y la naturaleza de aquéllas.

Disposiciones derogadas

ARTICULO 119.- Quedan derogadas las leyes 11.388 y 19.219, el segundo párrafo del artículo 372 de la Ley 19.550 y demás disposiciones legales que se opongan a lo establecido por esta ley.

Vigencia

ARTICULO 120.- Esta ley comenzará a regir a partir de su publicación. Sus normas son aplicables de pleno derecho a las cooperativas regularmente constituidas, sin requerirse la modificación de sus estatutos, a excepción de aquéllas que en forma expresa supediten su aplicación a lo dispuesto por el estatuto en cuyo caso regirán las respectivas disposiciones estatutarias.

A partir de la vigencia de la presente, la autoridad de aplicación no dará curso a ningún trámite de aprobación de reforma de estatutos y reglamentos si ellos no fueran conformes con las disposiciones de esta ley.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente:

1º.- La comunicación de la instalación de sucursales prevista por el artículo 14 debe efectuarse, para aquéllas que a la fecha de vigencia de esta ley se hallen en funcionamiento, dentro de los tres meses a contar de dicha fecha.

2º.- Las disposiciones del artículo 16 en materia de recursos son aplicables a las decisiones relacionadas con la autorización para funcionar, modificaciones estatutarias y reglamentos, que se adopten con posterioridad a la vigencia de esta ley.

3º.- Los certificados emitidos a la fecha de vigencia de esta ley deben ser sobreescritos o canjeados, con sujeción a las disposiciones del artículo 26, dentro del plazo de tres años a contar desde dicha fecha.

4º.- La disposición del artículo 38 último párrafo sobre rubricación de libros comenzará a regir a los seis meses de la vigencia de esta ley.

5º.- El artículo 40 se aplicará a las memorias correspondientes a los ejercicios que se inicien a partir de la vigencia de esta ley.

6º.- Los artículos 42 y 43 se aplicarán a los ejercicios que se cierren a partir de la vigencia de esta ley.

7º.- La anticipación mínima para la convocatoria de las asambleas establecidas por el artículo 48 rigen para las que se celebren a partir de los tres meses de vigencia de esta ley.

8º.- La obligación de realizar asambleas de delegados conforme al artículo 50 para aquellas cooperativas cuyo número de asociados sea de cinco mil y fuera inferior a diez mil a la fecha de vigencia de esta ley, comenzará a regir al año contado de esa fecha.

9º.- Para las cooperativas constituidas a la fecha de vigencia de esta ley en los artículos 63, 64, 76 y 77 regirán el número, calidades e incompatibilidades de los consejeros y síndicos a partir de la primera asamblea ordinaria que realicen con posterioridad a esa fecha.

10.- La auditoria impuesta por el artículo 81 debe ser designada a partir del primer ejercicio que se inicie con posterioridad de esta ley.

11.- Las disposiciones de los artículos 88 a 94 se aplicaran a las cooperativas que entran en liquidación a partir de la vigencia de esta ley.

ARTICULO 121.- Comuníquese, Publíquese, Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese - LANUSSE - Oscar R. Puiggrós - Gervacio R. Colombres.

▪ **LEY 23.427**

SE CREA EL FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVA. SE ESTABLECE UNA CONTRIBUCION ESPECIAL SOBRE LOS CAPITALES DE LAS COOPERATIVAS AL CIERRE DE CADA EJERCICIO ECONOMICO Y DURANTE CINCO PERÍODOS ANUALES

B.O. del 3/12/86

Sancionada el 15-10-86

Promulgada el 4-11-86

TITULO 1

Artículo 1°. Créase el fondo para Educación y Promoción Cooperativa cuyas finalidades serán las siguientes:

- a) Promover mediante los programas pertinentes la educación cooperativa en todos los niveles de enseñanza primaria, secundaria y terciaria; b) Promover la creación y desarrollo de cooperativas en todos los ciclos del quehacer económico, producción primaria y fabril, comercial, de servicios, vivienda, trabajo y consumo; c) Asesorar a las personas e instituciones sobre los beneficios que otorga la forma cooperativa de asociarse, previstas en la Ley 20.3370 aquella que en el futuro la modifique o sustituya;
- d) Promover la creación y funcionamiento de cooperativas que tengan por objeto elevar el nivel de vida de las comunidades aborígenes.

Artículo 2°.- El Fondo para Educación y Promoción Cooperativa se integrará con los siguientes recursos:

- a) Con las partidas presupuestarias específicas asignadas por la ley de presupuesto de cada año a la Secretaría de Acción Cooperativa; b) Con los recursos de la contribución especial prevista en el título II de la presente ley que le correspondan a la Nación por aplicación de lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley; c) Con las sumas que las cooperativas donen originadas en el Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa previsto en el artículo 42, inciso 3° de la Ley 20.337;
- d) El producto de las multas, intereses, reintegros y otros ingresos que resultaran de la administración del Fondo.

Artículo 3°.- Facúltase a la Secretaría de Acción Cooperativa a administrar y aplicar los recursos del Fondo a cuyo fin podrá especialmente:

- a) Elaborar y ejecutar programas de formación de cooperativas de productores y fabricantes a los fines de promover exportaciones de acuerdo con las normas establecidas por la Ley 23.101;
- b) Conceder a dichas cooperativas u otras cuyas actividades tengan interés nacional, préstamos con tasas preferenciales para financiar inversiones tendientes al logro, de las finalidades enunciadas en el artículo 1°;
- c) Otorgar recursos a organismos del Estado nacional, de los Estados Provinciales, a cooperativas y otras entidades de bien público para financiar planes encuadrados en las finalidades a que se alude en el artículo 1° de esta ley y planes de desarrollo cooperativo dispuestos por el Poder Ejecutivo.

Artículo 4°.- Para el mejor cumplimiento de las finalidades establecidas en la presente ley, la Secretaría de Acción Cooperativa podrá gestionar y recibir préstamos con cargo a los ingresos del Fondo de las instituciones crediticias del sistema bancario oficial.

Artículo 5°. El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar dentro del plazo de noventa (90) días de la promulgación de esta ley, las normas presupuestarias a que deberá ajustarse la Secretaría de Acción Cooperativa en la administración y aplicación de los recursos del Fondo para Educación y Promoción Cooperativa de acuerdo con el principio de unidad de caja del presupuesto nacional. Dicha Secretaría deberá someter anualmente a la

aprobación del Poder Ejecutivo los planes y programas a desarrollar que deberán financiarse con los recursos del mencionado Fondo.

TITULO II

Contribución especial sobre el capital de las Cooperativas Base de la contribución especial Vigencia. Sujetos

Artículo 6°.-Establécese con carácter transitorio una contribución especial que se aplicará en todo el territorio de la Nación, sobre los capitales de las cooperativas inscriptas en el registro pertinente de la Secretaría de Estado de Acción Cooperativa de la Nación, determinados de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, al cierre de cada ejercicio económico y durante cinco (5) períodos anuales. La reglamentación fijará el procedimiento a seguir en los casos en que no se efectúen balances anuales.

TITULO III

Liquidación. Base imponible

Artículo 7°.- El capital cooperativo surgirá de la diferencia entre el activo y pasivo al fin de cada período anual, de acuerdo con las normas de valuación y determinación que se establecen en la presente ley.

Valuación del activo

Artículo 8°. Los bienes del activo cooperativo deberán valuarse de acuerdo con las siguientes normas:

a) Bienes muebles amortizables:

1. Bienes adquiridos: al costo de adquisición o valor a la fecha de ingreso al patrimonio - excluidas en su caso diferencias de cambio se le aplicará el índice de actualización mencionado en el artículo 17 referido a la fecha de adquisición o de ingreso al patrimonio, que indique la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva para el mes al que corresponda la fecha de cierre del período fiscal que se liquida.

2. Bienes elaborados, fabricados o construidos: al costo de elaboración, fabricación o construcción se le aplicará el índice de actualización mencionado en el artículo 17 referido a la fecha de finalización de la elaboración, fabricación o construcción, que indique la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva para el mes al que corresponda la fecha de cierre del período fiscal que se liquida. Dicho costo de elaboración, fabricación o construcción se determinará actualizando mediante dicho índice cada una de las sumas invertidas desde la fecha de inversión hasta la fecha de finalización de la elaboración, fabricación o construcción.

3. Bienes en curso de elaboración, fabricación o construcción: al valor de cada una de las sumas invertidas se le aplicará el índice de actualización mencionado en el artículo 17 referido a la fecha de cada inversión, que indique la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva para el mes al que corresponda la fecha de cierre del período fiscal que se liquida.

En los casos de los bienes mencionados en los apartados 1 y 2 precedentes se detraerá del valor determinado de acuerdo con sus disposiciones, el importe que resulte de aplicar los coeficientes de amortización ordinaria que correspondan de conformidad con las disposiciones de la ley del impuesto a las ganancias correspondientes a los años de vida transcurridos desde la fecha de adquisición, de ingreso al patrimonio o de finalización de la elaboración, fabricación o construcción, hasta el ejercicio, inclusive, por el cual se liquida el gravamen.

b) Los inmuebles, excluidos los que revistan el carácter de bienes de cambio:

Inmuebles adquiridos: al costo de adquisición o valor a la fecha de ingreso al patrimonio se le aplicará el índice de actualización mencionado en el artículo 17, referido a la fecha de adquisición o de ingreso al patrimonio, que indique la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva para el mes al que corresponda la fecha de cierre del período fiscal que se liquida. Los edificios y construcciones serán excluidos del activo en virtud de la exención provista en la Ley N° 11.380.

Si los inmuebles estuvieran destinados a actividades forestales, frutícolas o similares, o que impliquen un consumo o agotamiento del bien, la reglamentación determinará el ajuste a practicar al valor obtenido de acuerdo con los párrafos precedentes mediante las normas de avalúo y, en su caso, las amortizaciones que correspondiere practicar.

El valor a computar para los inmuebles, de acuerdo con las disposiciones de este inciso, no podrá ser inferior al de la base imponible, en la parte proporcional al valor de la tierra, fijada a la fecha de cierre del ejercicio, a los efectos del pago de los impuestos inmobiliarios o tributos similares. Este valor se tomará, asimismo, en los casos en que no resulte posible determinar el costo de adquisición o el valor a la fecha de ingreso al patrimonio.

No obstante, cuando el contribuyente del gravamen demuestre fehacientemente, de acuerdo con las normas que al respecto dicte la dirección, que el valor de sus inmuebles es inferior en más de un diez por ciento (10%) al valor determinado de acuerdo con las normas precedentes, dicho organismo deberá autorizar que este último valor se reduzca en la proporción correspondiente.

En los supuestos de cesión gratuita de la nuda propiedad con reserva del usufructo, el cedente deberá computar como activo, a los fines de este impuesto, el valor total del inmueble, determinado de acuerdo con las normas de este inciso;

c) Los bienes de cambio: de acuerdo con las normas del impuesto a las ganancias;

d) Los depósitos y créditos en moneda extranjera y las existencias de la misma: de acuerdo con el último valor de cotización tipo comprador del Banco de la Nación Argentina a la fecha de cierre del ejercicio, incluyendo el importe de los intereses que se hubieran devengado a dicha fecha.

Los créditos deberán ser depurados de acuerdo con las disposiciones respectivas del impuesto a las ganancias;

e) Los depósitos y créditos en moneda nacional y las existencias de la misma: por su valor a la fecha de cierre de cada ejercicio, el que incluirá el importe de los intereses y de las actualizaciones legales, pactadas o fijadas judicialmente, que se hubieran devengado a la fecha de cierre del ejercicio.

La inclusión dispuesta precedentemente procederá también respecto del importe total de los intereses presuntos que hubieran debido computarse como renta gravada de acuerdo con las disposiciones de la ley de impuesto a las ganancias. Los créditos deberán ser depurados según se indica en el inciso precedente;

f) Los títulos públicos, acciones de sociedades anónimas y en comandita y demás títulos valores -incluidos los emitidos en moneda extranjera- que se coticen en bolsas o mercados: al último valor de cotización a la fecha de cierre del ejercicio, o último valor de mercado a dicha fecha en el supuesto de cuotas partes de fondos comunes de inversión.

Los que no se coticen en bolsa se valuarán por su costo, incrementado, de corresponder, en el importe de los intereses, actualizaciones y diferencias de cambio que se hubieran devengado a la fecha de cierre del ejercicio, excepto en el caso de acciones que no coticen en bolsa, para las que se estará a lo dispuesto en el párrafo siguiente.

Cuando se trate de acciones que no coticen en bolsa, el valor se determinará para cada acción, de acuerdo con el capital de la sociedad emisora, a la fecha del último ejercicio cerrado en el período fiscal al que corresponda la liquidación, determinado conforme con las normas de esta ley y sin excluir del activo los bienes exentos, de conformidad con lo que disponga el reglamento. Si la fecha de cierre del ejercicio fiscal de la sociedad emisora de las acciones no fuera coincidente con la del contribuyente, al valor así obtenido se le aplicará el índice de actualización mencionado en el artículo 17 referido al mes de cierre de ejercicio de la primera de acuerdo con lo que indique la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva para el mes de cierre de ejercicio segundo. La reglamentación fijará la forma de computar los aumentos y/o disminuciones de capital que hubieren producido entre la fecha de cierre de la sociedad emisora y la fecha de cierre del contribuyente, computándose los importes correspondientes sin actualización. Las acciones de las cooperativas serán computadas por su valor nominal.

g) Participaciones en el capital de cualquier tipo de sociedades, excluidas las acciones a que se refiere el inciso anterior: por el importe que se establezca para las respectivas participaciones de acuerdo con el capital de la sociedad de la que se participe, a la fecha del último ejercicio cerrado en el período fiscal al que corresponda la liquidación determinado conforme con las normas de esta ley y sin excluir del activo a los bienes exentos, de acuerdo con lo que disponga la reglamentación. Al solo efecto de la determinación del capital imponible, deberán considerarse como activo gravado o pasivo computable los saldos deudores o acreedores, respectivamente, de las cuentas particulares de los socios a la citada fecha.

Al valor de la participación que así resultare, el contribuyente deberá sumar o restar, respectivamente, el saldo acreedor o deudor de su cuenta particular a la fecha de cierre de su ejercicio, sin considerar los créditos provenientes de la acreditación de utilidades que hubieran sido tenidas en cuenta para determinar la participación a la fecha de cierre del ejercicio a que se refiere el párrafo anterior.

Si la fecha de cierre del ejercicio fiscal de la sociedad en cuyo capital se fuera participe no fuere coincidente con la del contribuyente, el valor de la respectiva participación, determinado de acuerdo con lo previsto en el primer párrafo, deberá ser actualizado mediante la aplicación del índice previsto en el artículo 17 referido al mes de cierre del ejercicio de la primera, de acuerdo con lo que indique la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva para el mes de cierre del ejercicio del segundo. La reglamentación fijará la forma de computar los aumentos y/o disminuciones de capital que se hubieran producido entre la fecha de cierre de la sociedad originada de la participación y la fecha de cierre del contribuyente, computándose los importes correspondientes sin actualización; En todos los casos en que de acuerdo con lo previsto, deban computarse los saldos deudores o acreedores de las cuentas particulares de los socios con el fin de sumarlos o restarlos al valor de las respectivas participaciones en los patrimonios sociales, no deberán considerarse aquellos saldos provenientes de operaciones similares a las que pudieran pactarse entre partes independientes. Estos últimos saldos serán considerados como créditos o deudas, según corresponda;

h) Los bienes inmateriales (llaves, marcas patentes, derechos de concesión y otros activos similares):

Por los costos de adquisición u obtención o valor a la fecha de ingreso al patrimonio, a los que se aplicará el índice de actualización mencionado en el artículo 17, referido a la fecha de adquisición, inversión o de ingreso al patrimonio que modifique la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva para el mes de cierre del período fiscal que se liquida.

De los valores determinados de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo precedente se detraerá el importe que resulte de aplicar los coeficientes de amortización ordinaria que correspondan de conformidad con las disposiciones de la ley del impuesto a las ganancias correspondientes a los años de vida útil transcurridos hasta el ejercicio inclusive por el cual se liquida el gravamen;

i) Los demás bienes: por su costo de adquisición, construcción o valor a la fecha de ingreso al patrimonio, actualizado por aplicación del índice mencionado en el artículo 17 referido a la fecha de adquisición, construcción o de ingreso al patrimonio que indique la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva para el mes de cierre del período fiscal que se liquida.

Exenciones

Artículo 9°.- Estarán exentos de la contribución especial:

- a) Los bienes situados en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en las condiciones previstas por la Ley 19.640;
- b) Las acciones y demás participaciones en el capital de otras entidades sujetas al impuesto sobre los capitales y las cuotas partes de fondos de inversión;
- c) Las cuotas sociales de cooperativas.

Bienes computables y no computables

Artículo 10.- Los bienes del activo, valuados de acuerdo con las normas del artículo anterior, se dividirán en bienes computables y no computables a los efectos de la liquidación de la contribución especial. No serán computables:

Los bienes situados con carácter permanente en el exterior;
Los bienes exentos.

Bienes situados en el exterior con carácter permanente

Artículo 11.- Se entenderán como bienes situados con carácter permanente en el exterior:

- a) Los bienes inmuebles situados fuera del territorio del país;
- b) Los derechos reales constituidos sobre bienes situados en el exterior;
- c) Las naves y aeronaves de matrícula extranjera;

- d) Los automotores patentados o registrados en el exterior;
- e) Los bienes muebles y los semovientes situados fuera del territorio del país. Respecto de los retirados o transferidos del país se presumirá que se encuentran con carácter permanente en el exterior cuando hayan permanecido allí por un lapso de seis (6) meses en forma continuada con anterioridad a la fecha de cierre del ejercicio;
- f) Los títulos y acciones emitidos por entidades del exterior y las cuotas o participaciones sociales otros títulos valores representativos del capital social de entidades constituidas o ubicadas en el exterior;
- g) Los depósitos en instituciones bancarias del exterior. Cuando tales depósitos hayan tenido origen en remesas efectuadas desde el país, se entenderá como radicado con carácter permanente en el exterior el saldo mínimo que arrojen las cuentas respectivas durante los seis (6) meses inmediatos anteriores a la fecha de cierre del ejercicio. A tales efectos se entenderá por saldo mínimo a la suma de saldos acreedores de todas las cuentas antes señaladas en el día en que dicha suma haya arrojado el menor importe;
- h) Los debentures emitidos por entidades o sociedades domiciliarias en el exterior;
- i) Los créditos cuyos deudores se domicilien en el extranjero, excepto los garantizados sobre bienes situados en el país.

Cuando los créditos respondan a saldos de precio por la transferencia a título oneroso de bienes situados en el país al momento de la enajenación o sean consecuencia de actividades desarrolladas en el país se entenderá que se encuentran con carácter permanente en el exterior cuando hayan permanecido allí más de seis (6) meses computados desde la fecha en que se hubieren hecho exigibles hasta la fecha de cierre del ejercicio.

Pasivo Computable

Artículo 12.- El pasivo cooperativo estará integrado por:

- a) Las deudas y las provisiones efectuadas para hacer frente a obligaciones devengadas no exigibles a la fecha de cierre del ejercicio. El importe de las deudas en moneda extranjera deberá convertirse teniendo en cuenta el último valor de cotización tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina a la fecha de cierre del ejercicio. Todas las deudas incluirán el importe de los intereses y actualizaciones devengados hasta la fecha indicada en el párrafo precedente;
- b) Las reservas técnicas de las cooperativas de seguros, de capitalización y similares, y los fondos de beneficios de los asegurados de vida;
- c) Los importes correspondientes a beneficios percibidos por adelantado y a realizar en ejercicios futuros.

Capital. Prorratio del Pasivo

Artículo 13.- El pasivo, determinado de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior se deducirá del activo del siguiente modo:

- a) Si el activo estuviese únicamente integrado por bienes computables a efectos de la liquidación de la contribución especial, el pasivo se deducirá íntegramente del valor de los mismos, considerándose capital a la diferencia resultante.
- b) Si el activo estuviese integrado por bienes computables y no computables a los efectos de la liquidación de la contribución especial, el pasivo deberá prorratearse en función de los valores correspondientes a tales bienes. El capital resultará de la diferencia entre el valor de los bienes computables del activo y la proporción del pasivo atribuible a los mismos.

Rubros no considerados como activo o pasivo

Artículo 14.- A los efectos de la liquidación de la presente contribución especial no se considerará como activo los saldos de cuotas suscriptas pendientes de integración de los asociados.

No se considerarán, asimismo, como pasivo las deudas originadas en contratos regidos por la Ley de Transferencia de Tecnología, cuando las mismas no se ajusten a las previsiones de dicha ley.

Capital Imponible Deducciones

Artículo 15.- Para obtener el capital cooperativo imponible se deducirán del capital los siguientes conceptos:

- a) Las sumas que se otorguen a los miembros del consejo de administración y de la sindicatura en concepto de reembolso de gastos y remuneraciones;
- b) Las habilitaciones y gratificaciones al personal que se paguen o pongan a disposición dentro de los cinco (5) meses de cerrado el ejercicio social;
- c) El retorno en dinero efectivo de los excedentes repartibles que vote la asamblea que trate el balance y demás documentación correspondiente al ejercicio social que sirvió de base para la liquidación de la presente contribución especial

La contribución especial resultante de la liquidación formulada de acuerdo con las normas precedentes no es deducible a efectos de la determinación del capital cooperativo sujeto a la misma.

Alícuota

Artículo 16.- La contribución especial a ingresar surgirá de la aplicación de la alícuota del uno con cincuenta por ciento (1,50%) sobre el capital sujeto a la misma. No corresponderá el ingreso de la contribución especial cuando su monto determinado de acuerdo con lo dispuesto en esta ley resulte igual o inferior a seiscientos australes (A 600).

Artículo 17.- A efectos de esta ley, los índices de actualización deberán ser elaborados mensualmente por la Dirección General impositiva sobre la base de los datos relativos a la variación del índice de precios al por mayor, nivel general, que deberá suministrar el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

La tabla a que se refieren los incisos a), b), g), h) e i) del artículo 8° contendrá valores mensuales para los veinticuatro (24) meses inmediatos anteriores, valores trimestrales promedio -por trimestre calendario desde el 1° de enero de 1975 y valores anuales promedio para los demás períodos, y tomará como base el índice de precios del mes para el cual se elabore la tabla.

Asimismo, la Dirección General Impositiva actualizará mensualmente el importe establecido en el artículo 16, aplicando el índice de actualización que modifique para cada mes la tabla mencionada en el párrafo anterior referido al mes de diciembre de 1985.

Artículo 18.- La contribución especial de esta ley se regirá por las disposiciones de la Ley 11.683 (texto ordenado en 1978 y sus modificaciones) y su aplicación, percepción y fiscalización estará a cargo de la Dirección General Impositiva.

La Dirección General Impositiva podrá exigir anticipos a cuenta de la obligación de cada período, en las condiciones establecidas en el artículo 28 del texto legal citado en el párrafo anterior.

Artículo 19.- Para los casos no previstos en esta ley y su reglamento, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la ley del impuesto sobre los capitales y su decreto reglamentario.

Artículo 20.- La exención prevista en el artículo 1°, inciso c), para las cooperativas de socorro o seguros mutuos de la ley 12.209 no regirá a los efectos de la contribución especial prevista en la presente ley.

Artículo 21.- Las exenciones totales o parciales referidas a títulos, letras, bonos y demás títulos valores, establecidas o que se establezcan en el futuro por leyes especiales, no tendrán efecto para la determinación de esta contribución especial.

Artículo 22.- El Poder Ejecutivo podrá otorgar para la contribución especial establecida en la presente ley, los mismos beneficios concedidos a empresas acogidas a regímenes de promoción sectoriales o regionales en relación a la exención parcial o total del impuesto sobre los capitales, siempre que la cooperativa se encuentre ubicada en la zona promocionada o realice las actividades que motivan la concesión del beneficio.

La misma facultad tendrá el Poder Ejecutivo para otorgar exenciones totales o parciales a las siguientes entidades:

- a) Cooperativas de servicios públicos en la medida en que los entes estatales que presten iguales servicios gocen de beneficios especiales en el impuesto sobre los capitales.
- b) Cooperativas de trabajo dedicadas a la educación e instrucción en cuanto la misma sea impartida en forma gratuita.

Artículo 23.- El producido de la contribución especial establecida en el Título II se distribuirá entre la Nación y las provincias adheridas al régimen de Coparticipación Federal de impuestos en la forma y proporciones que el mismo establezca para cada una de ellas.

Hasta tanto entre en vigencia el régimen mencionado en el párrafo precedente, el monto recaudado se asignará de la siguiente forma:

El cincuenta por ciento (50%) será atribuido a la Nación;

El cincuenta por ciento (50%) se atribuirá a las provincias en forma directamente proporcional a los importes que se le asignen a cada una de ellas en el régimen vigente en cada año de distribución provisoria de impuestos recaudados por la Nación.

Artículo 24.- Invítase a las Provincias a dictar en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las normas correspondientes para destinar los recursos, que por aplicación de esta ley percibirán, a las mismas finalidades enunciadas en el artículo 1º.

Artículo 25.- Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y tendrán efectos para los ejercicios fiscales que cierren a partir de dicha fecha.

Artículo 26.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS.

▪ **Ley 25.782 - ENTIDADES FINANCIERAS**

Modifícase la Ley Nº 21.526 (texto según Ley Nº 24.144, con las modificaciones introducidas por las Leyes Nros. 24.485 y 24.627).

Sancionada: Octubre 1 de 2003.

Promulgada de Hecho: Octubre 30 de 2003.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º — Sustitúyese el artículo 4º de la Ley 21.526 (texto según Ley 24.144 con las modificaciones introducidas por Leyes 24.485 y 24.627) por el siguiente:

Artículo 4º — El Banco Central de la República Argentina tendrá a su cargo la aplicación de la presente ley, con todas las facultades que ella y su Carta Orgánica le acuerdan. Dictará las normas reglamentarias que fueren menester para su cumplimiento, a cuyo efecto deberá establecer regulaciones y exigencias diferenciadas que ponderen la clase y naturaleza jurídica de las entidades, la cantidad y ubicación de sus casas, el volumen operativo y las características económicas y sociales de los sectores atendidos, dictando normas específicas para las cajas de crédito. Ejercerá también la fiscalización de las entidades en ella comprendidas.

ARTICULO 2º — Sustitúyese el artículo 26 de la Ley 21.526 por el siguiente:

Artículo 26: Las cajas de crédito podrán:

- a) Recibir depósitos a la vista;
- b) Recibir depósitos a plazo hasta un monto de diez mil pesos por titular, que podrá ser actualizado por el Banco Central de la República Argentina;
- c) Conceder créditos y otras financiaciones a corto y mediano plazo, destinado a pequeñas y medianas empresas urbanas y rurales, incluso unipersonales, profesionales, artesanos, empleados, obreros, particulares y entidades de bien público;
- d) Otorgar avales, fianzas y otras garantías;
- e) Efectuar inversiones de carácter transitorio en colocaciones fácilmente liquidables;
- f) Cumplir mandatos y comisiones conexos con sus operaciones;
- g) Debitar letras de cambio giradas contra los depósitos a la vista por parte de sus titulares a favor de terceros.

Las cajas de crédito operarán en casa única y exclusivamente con sus asociados, los que deberán haber suscrito un capital social mínimo de \$ 200, que podrá ser actualizado por el Banco Central de la República Argentina y hallarse radicados en el partido, departamento o división jurisdiccional equivalente de la respectiva provincia, correspondiente al domicilio de la entidad, y en la circunscripción electoral respectiva en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Deberán remitir información periódica a sus asociados sobre su estado de situación patrimonial y capacidad de cumplimiento de las obligaciones adquiridas, de conformidad a la reglamentación que dicte la autoridad de aplicación.

Las cajas de crédito deberán constituirse como cooperativas y deberán distribuir sus retornos en proporción a los servicios utilizados y les serán aplicables las limitaciones establecidas en los dos primeros párrafos del artículo 115 de la Ley 20.337.

ARTICULO 3º — En ningún caso las cajas de crédito cooperativas podrán transferir sus fondos de comercio a entidades de otra naturaleza jurídica ni transformarse en entidades comerciales mediante cualquier procedimiento legal.

ARTICULO 4º — Las cajas de crédito hoy existentes deberán adecuar su operatoria a la de la presente ley dentro de los noventa (90) días de su entrada en vigencia.

ARTICULO 5º — El Poder Ejecutivo procederá a publicar el texto ordenado de la Ley 21.526 y sus modificaciones dentro del término de los noventa (90) días contados desde la fecha de publicación de esta ley.

ARTICULO 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A UN DIA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRES.

— REGISTRADA BAJO EL Nº 25.782 —

EDUARDO O. CAMAÑO. — DANIEL O. SCIOLI. — Juan C. Oyarzún. — Juan J. Canals.

▪ **Ley 26.117**

PROMOCION DEL MICROREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL

Establécese la promoción y regulación del microcrédito, a fin de estimular el desarrollo integral de las personas, los grupos de escasos recursos y el fortalecimiento institucional de organizaciones no lucrativas de la sociedad civil que colaboren en el cumplimiento de las políticas sociales. Objetivos y Definiciones. Créase el Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social y el Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito. Exenciones de impuestos y tasas.

Sancionada: Junio 28 de 2006.

Promulgada: Julio 17 de 2006.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º — La presente ley tiene como objeto la promoción y regulación del microcrédito, a fin de estimular el desarrollo integral de las personas, los grupos de escasos recursos y el fortalecimiento institucional de organizaciones no lucrativas de la sociedad civil que colaboran en el cumplimiento de las políticas sociales.

De las definiciones.

ARTICULO 2º — A los efectos de esta ley se entenderá por:

Microcrédito: Aquellos préstamos destinados a financiar la actividad de emprendimientos individuales o asociativos de la Economía Social, cuyo monto no exceda una suma equivalente a los DOCE (12) salarios mínimo, vital y móvil.

Destinatarios de los Microcréditos: Las personas físicas o grupos asociativos de bajos recursos, que se organicen en torno a la gestión del autoempleo, en un marco de Economía Social, que realicen actividades de producción de manufacturas, reinserción laboral de discapacitados, o comercialización de bienes o servicios, urbanos o rurales y en unidades productivas cuyos activos totales no superen las CINCUENTA (50) canastas básicas totales para el adulto equivalente hogar ejemplo, cifra actualizada por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (INDEC), por puesto de trabajo.

Serán consideradas Instituciones de Microcrédito las asociaciones sin fines de lucro: asociaciones civiles, cooperativas, mutuales, fundaciones, comunidades indígenas, organizaciones gubernamentales y mixtas, que otorguen microcréditos, brinden capacitación y asistencia técnica a los emprendimientos de la Economía Social.

Del Programa de Promoción del Microcrédito para el desarrollo de la Economía Social.

ARTICULO 3º — Créase, en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, el PROGRAMA DE PROMOCION DEL MICROCREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL, con los siguientes objetivos:

1. Fomentar la Economía Social en el ámbito nacional, propiciando la adhesión de las provincias a la presente ley, haciendo posible su inclusión en los planes y proyectos de desarrollo local y regional;
2. Promover el desarrollo del Microcrédito y fortalecer las Instituciones que lo implementan mediante la asignación de recursos no reembolsables, préstamos, avales, asistencia técnica y capacitación;
3. Organizar el REGISTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES DE MICROCREDITO;
4. Administrar el FONDO NACIONAL DE PROMOCION DEL MICROCREDITO que se crea en la presente ley, promoviendo la obtención de recursos públicos y privados;
5. Regular y evaluar periódicamente las acciones desarrolladas procurando mejorar su eficiencia y eficacia;
6. Desarrollar mecanismos que regulen y reduzcan los costos operativos e intereses que incidan sobre los destinatarios de los Microcréditos;
7. Implementar estudios de impacto e investigación de la Economía Social, generando un sistema de información útil para la toma de decisiones;
8. Promover acciones a favor del desarrollo de la calidad y cultura productiva, que contribuyan a la sustentabilidad de los Emprendimientos de la Economía Social;
9. Promocionar el sector de la Economía Social, como temática de interés nacional, regional o local, en el marco de las transmisiones sin cargo previstas por la Ley de Radiodifusión o la que en el futuro sustituya a través del sistema educativo en general;
10. Propiciar la adecuación de la legislación y el desarrollo de políticas públicas en Economía Social.

De la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el desarrollo de la Economía Social.

ARTICULO 4º — Créase la COMISION NACIONAL DE COORDINACION del PROGRAMA DE PROMOCION DEL MICROCREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL, la que actuará como organismo desconcentrado en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION.

De las Funciones.

ARTICULO 5º — La COMISION NACIONAL que se crea por el artículo anterior tendrá las siguientes funciones:

1. Administrar el PROGRAMA DE PROMOCION DEL MICROCREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL;
2. Asegurar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, implementando las acciones necesarias para alcanzar los fines propuestos por el PROGRAMA;
3. Brindar información que le fuere requerida por el COMITE ASESOR, en temas referidos al seguimiento y monitoreo de la gestión del FONDO NACIONAL DE PROMOCION DEL MICROCREDITO;
4. Proponer, al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, el dictado de los actos administrativos que fueren necesarios, para la asignación de los recursos del FONDO NACIONAL DE PROMOCION DEL MICROCREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL, conforme las aplicaciones previstas en la presente ley;
5. Diseñar Programas de financiamiento, asistencia técnica y capacitación a favor de las referidas INSTITUCIONES DE MICROCREDITO;
6. Proponer, el dictado de las disposiciones reglamentarias obligatorias para las INSTITUCIONES DE MICROCREDITO, debidamente inscriptas en el REGISTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES DE MICROCREDITO;
7. Proponer, al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, la fijación de topes máximos en materia de tasas y cargos que se apliquen a las operaciones de microcréditos financiadas con recursos del Fondo Nacional;
8. Proponer, al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, la aplicación de sanciones, incluyendo la exclusión del REGISTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES DE MICROCREDITO en caso de comprobarse incumplimientos a la reglamentación respectiva;

9. Ejecutar los procedimientos de seguimiento, monitoreo, evaluación, proponiendo la aprobación o rechazo de las respectivas rendiciones de cuenta de Proyectos y Planes que realicen las INSTITUCIONES DE MICROCREDITO.

La COMISION NACIONAL DE COORDINACION del PROGRAMA promoverá la organización de "Unidades ejecutoras Provinciales o Locales de Economía Social" para aquellas actividades que considere más conveniente realizar a esos niveles.

De su Organización y Composición.

ARTICULO 6º — La COMISION NACIONAL DE COORDINACION del PROGRAMA DE PROMOCION DEL MICROCREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL estará integrada de la forma que determine la reglamentación y estará a cargo de un COORDINADOR GENERAL, designado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, quien tendrá rango, jerarquía y remuneración equivalente a la de un Subsecretario ministerial.

De las funciones.

ARTICULO 7º — Serán funciones del Coordinador General:

1. Representar legalmente a la COMISION NACIONAL DE COORDINACION del PROGRAMA DE PROMOCION DEL MICROCREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL ante las autoridades nacionales, provinciales y con el sector privado;
2. Suscribir cartas compromiso con instituciones u organismos conforme lo disponga la reglamentación.

De los recursos.

ARTICULO 8º — El MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION afectará los recursos necesarios para el funcionamiento de la COMISION NACIONAL DE COORDINACION del PROGRAMA DE PROMOCION DEL MICROCREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL.

Del Comité Asesor.

ARTICULO 9º — La COMISION NACIONAL estará asistida por un COMITE ASESOR constituido por un representante de los Ministerios de Desarrollo Social de cada una de las provincias argentinas, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de las Instituciones de Microcrédito, conforme lo determine la reglamentación, quienes ejercerán sus funciones "ad honorem".

ARTICULO 10. — Serán funciones y deberes del COMITE ASESOR del PROGRAMA:

1. Asistir a la COMISION NACIONAL en todas las acciones tendientes a la promoción del Microcrédito;
2. Proponer y/o elaborar proyectos para intensificar, ampliar o perfeccionar la atención a las INSTITUCIONES DE MICROCREDITO y a los destinatarios finales de sus acciones;
3. Contribuir en el examen y formulación de propuestas destinadas a atender las situaciones que exijan una acción coordinada de las entidades públicas y privadas dedicadas a esta temática;
4. Participar como nexo de comunicación entre la COMISION NACIONAL DE COORDINACION y las INSTITUCIONES DE MICROCREDITO.

El COMITE ASESOR del PROGRAMA someterá a la aprobación de la referida COMISION NACIONAL DE COORDINACION del mismo, dentro del plazo que ésta determine, su respectivo reglamento de funcionamiento interno.

Del Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito.

ARTICULO 11. — Créase, en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, el REGISTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES DE MICROCREDITO, que tendrá a su cargo los procedimientos de inscripción y control de las Instituciones adheridas a los fines de la presente ley, conforme determine la reglamentación.

Del Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito.

ARTICULO 12. — Créase, en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, un FONDO NACIONAL para la ejecución del PROGRAMA DE PROMOCION DEL MICROCREDITO.

ARTICULO 13. — Dicho FONDO se aplicará a:

1. Capitalizar a las INSTITUCIONES DE MICROCREDITO adheridas, mediante la asignación de fondos no reembolsables, préstamos dinerarios y avales, previa evaluación técnica y operativa de las propuestas o proyectos institucionales;
2. Subsidiar total o parcialmente la tasa de interés, los gastos operativos y de asistencia técnica de las INSTITUCIONES DE MICROCREDITO que corresponda a las operaciones de su incumbencia;
3. Fortalecer a las INSTITUCIONES DE MICROCREDITO mediante la provisión de asistencia técnica, operativa y de capacitación, en forma reembolsable o subsidiada.

De la integración.

ARTICULO 14. — El FONDO NACIONAL DE PROMOCION DEL MICROCREDITO estará integrado por:

1. Las asignaciones presupuestarias previstas en la presente ley y las que se establezcan en las respectivas Leyes de Presupuesto para la ADMINISTRACION NACIONAL de cada año;
2. Las herencias, donaciones, legados de terceros, cualquier otro título y fondos provenientes de organizaciones y agencias públicas o privadas de cooperación.

ARTICULO 15. — Fíjase, en la suma de PESOS CIENTO MILLONES (\$ 100.000.000), el capital inicial del FONDO NACIONAL DE PROMOCION DEL MICROCREDITO, integrado con las partidas presupuestarias asignadas al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, y facúltase al Poder Ejecutivo nacional a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias en el Presupuesto Nacional vigente. El mencionado FONDO podrá incrementarse conforme a los requerimientos presupuestarios de cada año.

De las Instituciones de Microcrédito y de los Programas.

ARTICULO 16. — Las INSTITUCIONES DE MICROCREDITO tendrán a su cargo el financiamiento de "Emprendimientos de la Economía Social", como así también, deberán desarrollar programas de capacitación, asistencia técnica y medición de los resultados de su aplicación.

ARTICULO 17. — La COMISION NACIONAL, promoverá la sostenibilidad de las INSTITUCIONES DE MICROCREDITO y el acceso al mismo por parte de los prestatarios finales previstos en la presente ley, estableciendo PROGRAMAS de financiamiento, asistencia técnica y capacitación a favor de las mismas.

Del control.

ARTICULO 18. — La supervisión de la aplicación de los fondos otorgados para la constitución de las carteras de crédito, oportunamente entregados a INSTITUCIONES DE MICROCREDITO, estará a cargo de la Comisión que se crea en el artículo 4º de la presente ley.

Dicha supervisión se extenderá hasta que se complete la primera colocación de la totalidad de los fondos recibidos por la respectiva INSTITUCION la que deberá presentar la documentación respaldatoria del total de los microcréditos otorgados, dándose por cumplida la rendición de cuentas, con el dictado del pertinente acto administrativo de cierre de la actuación.

La COMISION NACIONAL podrá monitorear las sucesivas colocaciones de fondos, especialmente el monto y la tasa de recupero alcanzado de acuerdo al contrato de crédito, quedando facultada a arbitrar los medios tendientes al recupero de aquéllos carentes de aplicación conforme los objetivos de la presente ley. Si se determinaran falencias, la institución de microcrédito será sancionada, sin perjuicio de las acciones legales que fueren menester. A los efectos indicados, las "INSTITUCIONES DE MICROCREDITO" deberán cumplimentar las obligaciones informativas periódicas que establezca la reglamentación pertinente al PROGRAMA DE PROMOCION DEL MICROCREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL.

Si se determinaran irregularidades, la INSTITUCION DE MICROCREDITO será sancionada por el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION con apercibimiento, suspensión en el Registro por un plazo máximo de SEIS (6) meses o exclusión definitiva de aquél. La suspensión en el registro implica la imposibilidad de recibir recursos provenientes del FONDO NACIONAL creado por el artículo 12 de esta ley.

La sanción se graduará de acuerdo con la gravedad de la irregularidad detectada y probada y por los antecedentes de la INSTITUCION.

La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir en estos casos, asegurando el respeto del derecho de defensa de la INSTITUCION involucrada.

De las exenciones.

ARTICULO 19. — Las operaciones de microcréditos estarán exentas de tributar los impuestos a las ganancias, ganancia mínima presunta, al valor agregado, según corresponda.

ARTICULO 20. — Las INSTITUCIONES DE MICROCREDITO que reciban recursos provenientes del FONDO NACIONAL DE PROMOCION DEL MICROCREDITO deberán aplicarlos exclusivamente a los fines convenidos, debiendo conservar los que se encuentren en disponibilidad, en cuentas corrientes o cajas de ahorro de entidades bancarias hasta el momento de su otorgamiento.

Asimismo, deberán dispensar idéntico tratamiento a los recursos obtenidos por la cancelación de los créditos efectuada por los destinatarios de los microcréditos otorgados.

ARTICULO 21. — Invítase a las provincias a adherir a la política de otorgamiento de exenciones de impuestos y tasas en sus respectivas jurisdicciones, como así también a crear Fondos Provinciales o Municipales de Economía Social destinados a los mismos fines previstos en la presente ley.

ARTICULO 22. — Incorpórase como apartado N° 10 del punto 16 del inciso h) del artículo 7° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997, el siguiente texto:

"10." Los intereses de las operaciones de microcréditos contempladas en la Ley de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social."

ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL SEIS.

— **REGISTRADA BAJO EL N° 26.117** —

ALBERTO BALESTRINI. — JOSE J. B. PAMPURO. — Enrique Hidalgo. — Juan Estrada.

▪ Decreto 1305/2006

PROMOCION DEL MICROCREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL

Apruébase la reglamentación de la Ley N° 26.117

Bs. As., 28/9/2006

VISTO el Expediente N° E-36191-2006 del Registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y la Ley N° 26.117, y

CONSIDERANDO:

Que, el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, el 28 de junio del 2006, sancionó la Ley N° 26.117 denominada de PROMOCION DEL MICROCREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL.

Que, dicha norma tiene por objeto la promoción y regulación del microcrédito a fin de estimular el desarrollo integral de las personas, los grupos de escasos recursos y el

fortalecimiento institucional de organizaciones no lucrativas de la Sociedad Civil que colaboran en el cumplimiento de las políticas sociales.

Que de esta manera se logrará promover el acceso al crédito a los sectores más vulnerables de la Sociedad, otorgándole institucionalidad a las microfinanzas, poniendo una vez más en práctica una política social de derechos y obligaciones.

Que, la nueva norma posibilitará el acceso al microcrédito a toda persona que reuniendo las condiciones pertinentes, no cuente con las garantías patrimoniales y/o no pueda cumplimentar los procedimientos y requisitos que, habitualmente, requieren las entidades bancarias.

Que, el cumplimiento de las obligaciones emergentes del PROGRAMA DE PROMOCION DEL MICROREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL, que involucran a los distintos actores, a partir del ejercicio de la responsabilidad social, fortalecerá valores sociales, tales como la confianza como parte de la construcción del capital social.

Que la Ley N° 26.117, que se reglamenta mediante el presente decreto, implica el desarrollo de capacidades asociativistas, solidarias y de concientización de valores, en orden al crecimiento de la persona.

Que, asimismo, dicha norma es estratégica, por cuanto se proyecta sobre la política económica, generando una estructura distinta, que no es la correspondiente a las finanzas convencionales, sino a las solidarias y cooperativas, que están sustentadas en relaciones de reciprocidad y distribución.

Que, así también, facilitará el desarrollo de emprendimientos de la economía social, cuyos titulares no tienen acceso al crédito bancario.

Que el valor social de las microfinanzas no es sólo mensurable en términos económicos, sino también, y este es su valor fundamental, en términos de desarrollo social y humano.

Que, el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMIA SOCIAL "MANOS A LA OBRA", creado por la Resolución N° 1375 del 13 de abril de 2004, del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, prevé, en una de sus líneas, el acceso al crédito, respetando el perfil productivo del territorio para generar desarrollo local, y fomentar el crecimiento económico regional, sin descuidar la mirada de un proyecto integral, nacional y popular.

Que existen numerosas Instituciones sin fines de lucro y programas gubernamentales dedicados al microcrédito.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL está interesado en acompañar a las Instituciones que ya trabajan en microfinanzas y a aquéllas que adhieran a la operatoria del nuevo régimen de promoción del microcrédito.

Que en la elaboración de la reglamentación que es materia del presente, se ha contado con el valioso aporte de representantes de organizaciones provenientes de todo el país, dedicadas al sector de las microfinanzas.

Que, por lo expresado, se considera de significativa trascendencia reglamentar la Ley N° 26.117, a fin de posibilitar la puesta en marcha de una herramienta considerada estratégica para el desarrollo de la economía social.

Que, en ese orden de ideas, se propone regular aquellas materias estrictamente necesarias que contribuyan a la adecuada aplicación de la Ley N° 26.117.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ha tomado la intervención de su competencia.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado para el dictado del presente en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 26.117 denominada de PROMOCION DEL MICROCREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL, la que como ANEXO I forma parte integrante del presente decreto.

Artículo 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — KIRCHNER. — Alberto A. Fernández. — Alicia M. Kirchner.

ANEXO I

REGLAMENTACION LEY Nº 26.117 DE "PROMOCION DEL MICROCREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL"

ARTICULO 1º — A los efectos de cumplimentar el objeto de la Ley que se reglamenta, estipulado en su artículo 1º, incorpórase el PROGRAMA DE PROMOCION DEL MICROCREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL al PLAN NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMIA SOCIAL "MANOS A LA OBRA", que ejecuta el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, con el objeto de:

- 1) Generar y favorecer el crecimiento de los ingresos de personas y/o grupos asociados, sustentables en el marco de la economía social.
- 2) Consolidar una red pública con la intervención del Estado Nacional y la Sociedad Civil que permita la aplicación de las políticas sociales integrales.
- 3) Fortalecer desde una cultura de la solidaridad, el nivel de gestión de las organizaciones de la Sociedad Civil, desde un abordaje innovativo para que éstas puedan operar con estándares determinados en cuanto a procesos de previsibilidad en la aplicación de la metodología del microcrédito.

ARTICULO 2º — El concepto de microcrédito contemplado en el Artículo 2º de la ley, refiere aquellos préstamos que permitan, a emprendedores, contar con un capital de giro destinado a financiar la actividad de emprendimientos productivos y de comercialización de bienes y servicios, individuales o asociativos, en el marco de las acciones promovidas por el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMIA SOCIAL "MANOS A LA OBRA".

Serán considerados destinatarios del PROGRAMA DE PROMOCION DEL MICROCREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL:

1. Las personas físicas de escasos recursos, cuyos emprendimientos formen parte de programas integrales de desarrollo local, para su reinserción laboral, apoyados por las Provincias, los Municipios y/o el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se tendrá especial atención sobre personas o grupos asociativos con capacidades diferentes.
2. Serán considerados grupos asociativos de escasos recursos, entre otros, los siguientes:

- a) Los grupos de gestión asociada constituidos por personas de escasos recursos, unidos por un proyecto común, de hasta CINCO (5) miembros.
- b) Las Cooperativas encuadradas en lo normado por la Resolución Nº 3026 del 26 de septiembre de 2006 del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL.

Las Instituciones de microcrédito contempladas en el artículo 2º de la Ley Nº 26.117 serán organizaciones gubernamentales o no gubernamentales que registren antecedentes en la ejecución y administración de programas sociales de promoción, prevención, desarrollo comunitario y seguridad social, o consorcios de gestión de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 2618/04 del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

ARTICULO 3º — Dentro de los alcances del PROGRAMA DE PROMOCION DEL MICROCREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL, creado por la Ley que se reglamenta, se incluyen objetivos que comprenden a las Provincias, Municipios e Instituciones que trabajan en microfinanzas.

Para aplicar estos principios en todo el territorio nacional, se deberá propender la adhesión de las Provincias a la Ley Nº 26.117, debiendo promover la exención de impuestos y tasas en sus respectivas jurisdicciones, con relación a aquellos beneficiarios de microcréditos para el desarrollo de proyectos de la economía social.

ARTICULO 4º — La COMISION NACIONAL DE COORDINACION DEL PROGRAMA DE PROMOCION DEL MICROCREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL actuará como organismo desconcentrado del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y dependerá de la SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO de dicha jurisdicción.

ARTICULO 5º — A los efectos de asegurar el cumplimiento de las funciones de la COMISION NACIONAL DE COORDINACION DEL PROGRAMA DE PROMOCION DEL MICROCREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL, de conformidad con lo establecido en el Artículo 5º de la Ley Nº 26.117, el Coordinador General de la misma, en un plazo de SESENTA (60) días desde la publicación del presente, deberá elevar a la SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, un Reglamento Interno de Funcionamiento de la citada COMISION, para su correspondiente aprobación.

ARTICULO 6º — Establécese que la COMISION NACIONAL DE COORDINACION DEL PROGRAMA DE PROMOCION DEL MICROCREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL, se regirá por el Reglamento Interno de Funcionamiento, aprobado por la SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y estará dirigida y administrada por UN (1) Coordinador General designado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, quien tendrá rango, jerarquía y remuneración equivalente a la de un Subsecretario ministerial. El Coordinador General estará asistido por un DIRECTORIO integrado por OCHO (8) miembros de los siguientes Organismos: UNO (1) por el MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA, UNO (1) por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, UNO (1) por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, UNO (1) por el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, UNO (1) por el CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER, UNO (1) por el INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, UNO (1) por la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS y UN (1) miembro de JURISDICCION PROVINCIAL, cuya provincia hubiera adherido a la Ley Nº 26.117.

Los miembros de los organismos nacionales serán designados como directores por el titular de la SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, sin perjuicio de las funciones que desempeñen en su lugar de origen, duraran DOS (2) años en sus funciones, pudiendo ser removidos en la forma que establezca el Reglamento de Funcionamiento Interno.

Deberán reunir como requisito DOS (2) años, como mínimo, de desempeño de gestión en el área de políticas sociales, en un cargo o función no menor a Director nacional. Cuando fuere necesario, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, se hará cargo de los gastos y viáticos que se originen en cumplimiento de sus funciones.

En relación al miembro de jurisdicción provincial también será designado por el titular de la SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, con idénticos plazos de duración en el ejercicio de su función que los mencionados precedentemente, pudiendo ser removido en la forma que establezca el Reglamento de Funcionamiento Interno.

Deberá reunir como requisito DOS (2) años, como mínimo, de desempeño de gestión en el área de políticas sociales, en un cargo o función no menor a Director provincial o su equivalente, y percibirá mientras dure en el ejercicio de la función en concepto de gasto de representación, una suma máxima equivalente al Nivel A, Función Ejecutiva - Nivel III del SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA (SINAPA), aprobado por Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995).

ARTICULO 7º — Sin reglamentar.

ARTICULO 8º — El MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL asignará recursos humanos, los espacios físicos, y el equipamiento necesarios para el funcionamiento de la COMISION NACIONAL DE COORDINACION DEL PROGRAMA DE PROMOCION DEL MICROCREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL, arbitrando los medios que aseguren su aplicación en todo el ámbito del territorio nacional.

ARTICULO 9º — El COMITE ASESOR de la COMISION NACIONAL DE COORDINACION DEL PROGRAMA DE PROMOCION DEL MICROCREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL estará integrado por un representante titular

y un suplente de los Ministerios o Secretarías de Desarrollo Social de cada una de las Provincias que hubieren adherido a la Ley Nº 26.117; y por un representante titular y un suplente, de las Instituciones de Microcréditos, por cada una de las regiones que se mencionan a continuación: UN (1) representante por la Región del NOA, UN (1) representante por la Región del NEA, UN (1) representante por la Región Centro, UN (1) representante por la Región Patagonia Norte, UN (1) representante por la Región Patagonia Sur, UN (1) representante por la Región Cuyo, UN (1) representante por la Provincia de Buenos Aires, UN (1) representante por los distritos del conurbano bonaerense y UN (1) representante por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las reuniones del COMITE ASESOR serán presididas por el COORDINADOR GENERAL, quien podrá delegar tal función en uno de los integrantes del DIRECTORIO.

El COMITE ASESOR se reunirá una vez por cuatrimestre y los gastos de traslados estarán cubiertos por la COMISION NACIONAL DE COORDINACION DEL PROGRAMA DE PROMOCION DEL MICROREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL.

ARTICULO 10. — Sin reglamentar.

ARTICULO 11. — Sin reglamentar

ARTICULO 12. — Sin reglamentar.

ARTICULO 13. — La administración y ejecución del PROGRAMA DE PROMOCION DEL MICROREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL estará a cargo de la COMISION NACIONAL DE COORDINACION DEL PROGRAMA DE PROMOCION DEL MICROREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL, aplicándose al efecto el FONDO NACIONAL DE PROMOCION DEL MICROREDITO.

La COMISION NACIONAL podrá diseñar líneas de financiamiento específicos, según las necesidades del sector de prestatarios y de las Instituciones de Microcrédito.

A ese efecto, el COMITE ASESOR podrá elevar sugerencias y propuestas diversas, como así también diseñar y proponer un sistema de control y gestión unificado para todas las Instituciones inscriptas en el REGISTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES DE MICROREDITO.

ARTICULO 14. — Sin reglamentar.

ARTICULO 15. — Sin reglamentar.

ARTICULO 16. — Sin reglamentar.

ARTICULO 17. — Sin reglamentar.

ARTICULO 18. — Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley que se reglamenta, la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, podrá realizar las tareas de contralor previstas en la Ley Nº 24.156 y sus modificaciones, respecto de los fondos transferidos en el marco del PROGRAMA DE PROMOCION DEL MICROREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL.

ARTICULO 19. — La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, en un plazo no mayor a SESENTA (60) días desde la publicación del presente en el Boletín Oficial, deberá adoptar las medidas que resulten necesarias en relación a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley que se reglamenta.

ARTICULO 20. — Sin reglamentar.

ARTICULO 21. — Sin reglamentar.

ARTICULO 22. — La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, en un plazo no mayor a SESENTA (60) días desde la publicación del presente en el Boletín Oficial, deberá adoptar las medidas que resulten necesarias en relación a lo establecido en el artículo 22 de la Ley que se reglamenta.

▪ **Ley 26.173 (Modificación de la Ley N° 21.526.)**

Sancionada: Noviembre 22 de 2006

Promulgada de Hecho: Diciembre 11 de 2006

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º — Sustitúyese el artículo 26 de la Ley N° 21.526 (texto según Ley N° 25.782), por el siguiente:

Artículo 26: Las cajas de crédito cooperativas podrán:

- a) Recibir depósitos a la vista, en caja de ahorros y a plazo, los que no tendrán límite alguno, excepto cuando sea de aplicación lo previsto en el inciso d) del artículo 18;
- b) Debitar letras de cambio giradas contra los depósitos a la vista por parte de sus titulares. Las letras de cambio podrán cursarse a través de las cámaras electrónicas de compensación;
- c) Conceder créditos y otras financiaciones, destinados a pequeñas y medianas empresas urbanas y rurales, incluso unipersonales, profesionales, artesanos, empleados, obreros, particulares, cooperativas y entidades de bien público;
- d) Otorgar avales, fianzas y otras garantías;
- e) Efectuar inversiones de carácter transitorio en colocaciones fácilmente liquidables;
- f) Cumplir mandatos y comisiones conexos con sus operaciones.

No podrán realizar las operaciones previstas en los incisos c), d) y e) anteriores con otras entidades financieras, cooperativas de crédito o mutuales y cualquiera otra persona física o jurídica cuya actividad sea el otorgamiento de financiaciones, fianzas, avales u otras garantías, cualquiera sea su modalidad.

ARTICULO 2º — Incorpórase como artículo 18 de la Ley N° 21.526 (texto según Ley N° 24.144), el siguiente:

Artículo 18: Las cajas de crédito cooperativas deberán ajustarse a los siguientes requisitos:

- a) Las operaciones activas se realizarán preferentemente con asociados que se encuentren radicados o realicen su actividad económica en la zona de actuación en la que se le autorice a operar. El Banco Central de la República Argentina delimitará el alcance de dicha zona de actuación atendiendo a la viabilidad de cada proyecto, a cuyo efecto sólo se admitirá la expansión de la caja de crédito cooperativa en sus adyacencias, de acuerdo con los criterios y parámetros objetivos que adopte la reglamentación que dicte dicha institución. Deberán remitir información periódica a sus asociados sobre su estado de situación patrimonial y capacidad de cumplimiento de las obligaciones adquiridas, de conformidad a la reglamentación que dicte la autoridad de aplicación.

- b) Deberán distribuir sus retornos en proporción a los servicios utilizados y/o al capital aportado.

- c) Podrán solicitar la apertura de hasta CINCO (5) sucursales dentro de su zona de actuación. Sin perjuicio de ello, la reglamentación que dicte el Banco Central de la República Argentina podrá contemplar la instalación de otras dependencias adicionales o puestos de atención en dicha zona, los que no serán computados a los fines del límite precedente.

Para su identificación deberán incluir las referencias necesarias que permitan asociar unívocamente la caja de crédito cooperativa a su zona de actuación.

- d) Para la captación de fondos no será aplicable el límite de la zona de actuación en la que se encuentren autorizadas a operar, sin perjuicio de que resultará de aplicación el principio de operar en ese rubro preferentemente con asociados. La reglamentación que dicte el Banco Central de la República Argentina deberá contemplar los recaudos pertinentes a efectos de prevenir un grado elevado de concentración de los pasivos considerando las características en cuanto a monto, plazo, el carácter de asociado o no del titular.

- e) El requisito estipulado en el artículo 18, inciso a) en materia de financiaciones preferentes con asociados y dentro de la zona de actuación de la caja de crédito cooperativa, se considerará cumplido cuando las que se otorguen a asociados no sean inferiores a 75% y siempre que las que se concierten fuera de la zona de actuación no superen el 15%, en ambos casos respecto del total de financiaciones. El Banco Central de la República Argentina podrá aumentar la proporción de operaciones con asociados y disminuir el límite para las que se concierten fuera de la zona de actuación. A tal fin,

deberá tener en cuenta, entre otros factores, la evolución en el desarrollo que alcance la operatoria de la caja de crédito cooperativa, considerada individualmente y/o en su conjunto, en su zona de actuación.

f) Las cajas de crédito cooperativas deberán asociarse en una cooperativa de grado superior especializada con capacidad, a satisfacción del Banco Central de la República Argentina y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, para proveer a sus asociadas asistencia financiera y otros servicios financieros, incluyendo los vinculados a la colocación de excedentes transitorios de liquidez; brindar soporte operativo, asesoramiento, etc., así como de representación ante las autoridades regulatorias y de supervisión competentes.

Dicha integración deberá concretarse en un plazo dentro de los CINCO (5) años siguientes al inicio de sus actividades, o el plazo menor que establezca la reglamentación del Banco Central de la República Argentina.

ARTICULO 3º — Incorpórase como artículo 100 bis, al Capítulo XIII —Disposiciones Generales—, artículo 1º del Decreto-Ley 5965/63, el siguiente texto:

Artículo 100 bis: El Banco Central de la República Argentina, como autoridad de aplicación del instituto de la letra de cambio —limitada a su operatoria por parte de las cajas de crédito cooperativas — podrá:

1. Reglamentar las condiciones y requisitos de apertura, funcionamiento y cierre con sus respectivas causales de las cuencas a la vista en las cajas de crédito cooperativas sobre las que se podrán librar letras de cambio, así como el régimen de compensación electrónica de estos instrumentos, incluyendo en esta última materia un régimen especial de conservación, exposición, transmisión por cualquier medio, registro contable, pago, rechazo y compensación y cualquier otro elemento que se requiera para hacerlo operativo.
2. Con carácter temporario, fijar un monto máximo a las letras de cambio libradas al portador y limitar el número de endosos de estos instrumentos.
3. Reglamentar las fórmulas de la letra de cambio y decidir sobre todo lo conducente a la prestación de un eficaz servicio de letra de cambio, incluyendo la fórmula documental o electrónica de la registración, rechazo y solución de problemas meramente formales de las letras de cambio.

ARTICULO 4º — Sustitúyese el inciso c) del artículo 9º de la Ley N° 21.526, por el siguiente:

Artículo 9º:

c) Las cajas de crédito, que deberán constituirse en forma de sociedad cooperativa.'

ARTICULO 5º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS.

— REGISTRADA BAJO EL N° 26.173 —

ALBERTO E. BALESTRINI. — JOSE J. B. PAMPURO. — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada.

▪ Ley 26.684

Modificación de la Ley N° 24.522 de CONCURSOS Y QUIEBRAS

Sancionada: Junio 1 de 2011

Promulgada: Junio 29 de 2011

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º — Incorpórase como inciso 8 del artículo 11 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el siguiente texto:

8) Acompañar nómina de empleados, con detalle de domicilio, categoría, antigüedad y última remuneración recibida. Deberá acompañarse también declaración sobre la

existencia de deuda laboral y de deuda con los organismos de la seguridad social certificada por contador público.

ARTICULO 2º — Modifícase el inciso 10 del artículo 14 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma:

10) La fijación de una audiencia informativa que se realizará con cinco (5) días de anticipación al vencimiento del plazo de exclusividad previsto en el artículo 43. Dicha audiencia deberá ser notificada a los trabajadores del deudor mediante su publicación por medios visibles en todos sus establecimientos.

ARTICULO 3º — Modifícase el inciso 11 del artículo 14 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma:

11) Correr vista al síndico por el plazo de diez (10) días, el que se computará a partir de la aceptación del cargo, a fin de que se pronuncie sobre:

- a) Los pasivos laborales denunciados por el deudor;
- b) Previa auditoría en la documentación legal y contable, informe sobre la existencia de otros créditos laborales comprendidos en el pronto pago.

ARTICULO 4º — Incorpórase como inciso 13 del artículo 14 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el siguiente texto:

13) La constitución de un comité de control, integrado por los tres (3) acreedores quirografarios de mayor monto, denunciados por el deudor y un (1) representante de los trabajadores de la concursada, elegido por los trabajadores.

ARTICULO 5º — Modifícase el artículo 16 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 16: Actos prohibidos. El concursado no puede realizar actos a título gratuito o que importen alterar la situación de los acreedores por causa o título anterior a la presentación.

Pronto pago de créditos laborales. Dentro del plazo de diez (10) días de emitido el informe que establece el artículo 14 inciso 11), el juez del concurso autorizará el pago de las remuneraciones debidas al trabajador, las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades laborales y las previstas en los artículos 132 bis, 212, 232, 233 y 245 a 254, 178, 180 y 182 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744; las indemnizaciones previstas en la ley 25.877, en los artículos 1º y 2º de la ley 25.323; en los artículos 8º, 9º, 10, 11 y 15 de la ley 24.013; en el artículo 44 y 45 de la ley 25.345; en el artículo 52 de la ley 23.551; y las previstas en los estatutos especiales, convenios colectivos o contratos individuales, que gocen de privilegio general o especial y que surjan del informe mencionado en el inciso 11 del artículo 14.

Para que proceda el pronto pago de crédito no incluido en el listado que establece el artículo 14 inciso 11), no es necesaria la verificación del crédito en el concurso ni sentencia en juicio laboral previo.

Previa vista al síndico y al concursado, el juez podrá denegar total o parcialmente el pedido de pronto pago mediante resolución fundada, sólo cuando existiere duda sobre su origen o legitimidad, se encontraren controvertidos o existiere sospecha de connivencia entre el peticionario y el concursado.

En todos los casos la decisión será apelable.

La resolución judicial que admite el pronto pago tendrá efectos de cosa juzgada material e importará la verificación del crédito en el pasivo concursal.

La que lo deniegue, habilitará al acreedor para iniciar o continuar el juicio de conocimiento laboral ante el juez natural.

No se impondrán costas al trabajador en la solicitud de pronto pago, excepto en el caso de connivencia, temeridad o malicia.

Los créditos serán abonados en su totalidad, si existieran fondos líquidos disponibles. En caso contrario y hasta que se detecte la existencia de los mismos por parte del síndico se deberá afectar el tres por ciento (3%) mensual del ingreso bruto de la concursada.

El síndico efectuará un plan de pago proporcional a los créditos y sus privilegios, no pudiendo exceder cada pago individual en cada distribución un monto equivalente a cuatro (4) salarios mínimos vitales y móviles.

Excepcionalmente el juez podrá autorizar, dentro del régimen de pronto pago, el pago de aquellos créditos amparados por el beneficio y que, por su naturaleza o circunstancias particulares de sus titulares, deban ser afectados a cubrir contingencias de salud, alimentarias u otras que no admitieran demoras.

En el control e informe mensual, que la sindicatura deberá realizar, incluirá las modificaciones necesarias, si existen fondos líquidos disponibles, a los efectos de abonar la totalidad de los prontos pagos o modificar el plan presentado.

Actos sujetos a autorización. Debe requerir previa autorización judicial para realizar cualquiera de los siguientes actos: los relacionados con bienes registrables; los de disposición o locación de fondos de comercio; los de emisión de debentures con garantía especial o flotante; los de emisión de obligaciones negociables con garantía especial o flotante; los de constitución de prenda y los que excedan de la administración ordinaria de su giro comercial.

La autorización se tramita con audiencia del síndico y del comité de control; para su otorgamiento el juez ha de ponderar la conveniencia para la continuación de las actividades del concursado y la protección de los intereses de los acreedores.

ARTICULO 6º — Incorpórase como último párrafo del artículo 19 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el siguiente texto:

Quedan excluidos de la disposición precedente los créditos laborales correspondientes a la falta de pago de salarios y toda indemnización derivada de la relación laboral.

ARTICULO 7º — Modifícase el artículo 20 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 20: *Contratos con prestación recíproca pendiente.* El deudor puede continuar con el cumplimiento de los contratos en curso de ejecución, cuando hubiere prestaciones recíprocas pendientes. Para ello debe requerir autorización del juez, quien resuelve previa vista al síndico. La continuación del contrato autoriza al cocontratante a exigir el cumplimiento de las prestaciones adeudadas a la fecha de presentación en concurso bajo apercibimiento de resolución.

Las prestaciones que el tercero cumpla después de la presentación en concurso preventivo, y previo cumplimiento de lo dispuesto en este precepto, gozan del privilegio previsto por el artículo 240. La tradición simbólica anterior a la presentación, no importa cumplimiento de la prestación a los fines de este artículo.

Sin perjuicio de la aplicación del artículo 753 del Código Civil, el tercero puede resolver el contrato cuando no se le hubiere comunicado la decisión de continuarlo, luego de los treinta (30) días de abierto el concurso. Debe notificar al deudor y al síndico.

Servicios públicos. No pueden suspenderse los servicios públicos que se presten al deudor por deudas con origen en fecha anterior a la de la apertura del concurso. Los servicios prestados con posterioridad a la apertura del concurso deben abonarse a sus respectivos vencimientos y pueden suspenderse en caso de incumplimiento mediante el procedimiento previsto en las normas que rigen sus respectivas prestaciones.

En caso de liquidación en la quiebra, los créditos que se generen por las prestaciones mencionadas en el párrafo anterior gozan de la preferencia establecida por el artículo 240.

ARTICULO 8º — Modifícase el artículo 29 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 29: *Carta a los acreedores e integrantes del comité de control.* Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28, el síndico debe enviar a cada acreedor denunciado y a los miembros del comité de control, carta certificada en la cual le haga conocer la apertura del concurso, incluyendo los datos sucintos de los requisitos establecidos en los incisos 1 y 3 del artículo 14, su nombre y domicilio y las horas de atención, la designación del juzgado y secretaría actuantes y su ubicación y los demás aspectos que estime de interés para los acreedores.

La correspondencia debe ser remitida dentro de los cinco (5) días de la primera publicación de edictos.

La omisión en que incurra el síndico, respecto del envío de las cartas, no invalida el proceso.

ARTICULO 9º — Incorpórase como último párrafo del artículo 34 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el siguiente texto:

Los trabajadores de la concursada que no tuvieran el carácter de acreedores tendrán derecho a revisar los legajos y ser informados por el síndico acerca de los créditos insinuados.

ARTICULO 10. — Modifícase el artículo 42 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 42: *Resolución de categorización.* Dentro de los diez (10) días siguientes a la finalización del plazo fijado en el artículo 40, el juez dictará resolución fijando definitivamente las categorías y los acreedores comprendidos en ellas.

Constitución del comité de control. En dicha resolución el juez designará a los nuevos integrantes del comité de control, el cual quedará conformado como mínimo por un (1) acreedor por cada categoría de las establecidas, debiendo integrar el mismo necesariamente el acreedor de mayor monto dentro de la categoría y por dos (2) nuevos representantes de los trabajadores de la concursada, elegidos por los trabajadores, que se incorporarán al ya electo conforme el artículo 14, inciso 13. El juez podrá reducir la cantidad de representantes de los trabajadores cuando la nómina de empleados así lo justifique. A partir de ese momento cesarán las funciones de los anteriores integrantes del comité que representan a los acreedores.

ARTICULO 11. — Modifícase el artículo 45 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 45: *Plazo y mayorías para la obtención del acuerdo para acreedores quirografarios.* Para obtener la aprobación de la propuesta de acuerdo preventivo, el deudor deberá acompañar al juzgado, hasta el día del vencimiento del período de exclusividad, el texto de la propuesta con la conformidad acreditada por declaración escrita con firma certificada por ante escribano público, autoridad judicial, o administrativa en el caso de entes públicos nacionales, provinciales o municipales, de la mayoría absoluta de los acreedores dentro de todas y cada una de las categorías, que representen las dos terceras partes del capital computable dentro de cada categoría. Sólo resultarán válidas y computables las conformidades que lleven fecha posterior a la última propuesta o su última modificación presentada por el deudor en el expediente.

La mayoría de capital dentro de cada categoría se computa teniendo en consideración la suma total de los siguientes créditos:

- a) Quirografarios verificados y declarados admisibles comprendidos en la categoría;
- b) Privilegiados cuyos titulares hayan renunciado al privilegio y que se hayan incorporado a esa categoría de quirografarios;
- c) El acreedor admitido como quirografario, por habersele rechazado el privilegio invocado, será excluido de integrar la categoría, a los efectos del cómputo, si hubiese promovido incidente de revisión, en los términos del artículo 37.

Se excluye del cómputo al cónyuge, los parientes del deudor dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o adoptivos, y sus cesionarios dentro del año anterior a la presentación. Tratándose de sociedades no se computan los socios, administradores y acreedores que se encuentren respecto de ellos en la situación del párrafo anterior, la prohibición no se aplica a los acreedores que sean accionistas de la concursada, salvo que se trate de controlantes de la misma.

El deudor deberá acompañar, asimismo, como parte integrante de la propuesta, un régimen de administración y de limitaciones a actos de disposición aplicable a la etapa de cumplimiento, y la conformación de un comité de control que actuará como controlador del acuerdo, que sustituirá al comité constituido por el artículo 42, segundo párrafo. La integración del comité deberá estar conformada por acreedores que representen la mayoría del capital, y permanecerán en su cargo los representantes de los trabajadores de la concursada.

Con cinco (5) días de anticipación al vencimiento del plazo del período de exclusividad, se llevará a cabo la audiencia informativa con la presencia del juez, el secretario, el deudor, el comité provisorio de control y los acreedores que deseen concurrir. En dicha audiencia el deudor dará explicaciones respecto de la negociación que lleva a cabo con sus acreedores, y los asistentes podrán formular preguntas sobre las propuestas.

Si con anterioridad a la fecha señalada para la audiencia informativa, el deudor hubiera obtenido las conformidades previstas por el artículo 45, y hubiera comunicado dicha circunstancia al juzgado, acompañando las constancias, la audiencia no se llevará a cabo.

ARTICULO 12. — Sustitúyese el inciso 1) del artículo 48 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el siguiente:

1) *Apertura de un registro*. Dentro de los dos (2) días el juez dispondrá la apertura de un registro en el expediente para que dentro del plazo de cinco (5) días se inscriban los acreedores, la cooperativa de trabajo conformada por trabajadores de la misma empresa —incluida la cooperativa en formación— y otros terceros interesados en la adquisición de las acciones o cuotas representativas del capital social de la concursada, a efectos de formular propuesta de acuerdo preventivo. Al disponer la apertura del registro el juez determinará un importe para afrontar el pago de los edictos. Al inscribirse en el registro, dicho importe deberá ser depositado por los interesados en formular propuestas de acuerdo.

ARTICULO 13. — Incorpórase como artículo 48 bis de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el siguiente texto:

Artículo 48 bis: En caso que, conforme el inciso 1 del artículo anterior, se inscriba la cooperativa de trabajo —incluida la cooperativa en formación—, el juez ordenará al síndico que practique liquidación de todos los créditos que corresponderían a los trabajadores inscriptos por las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744, los estatutos especiales, convenios colectivos o la que hayan acordado las partes. Los créditos así calculados podrán hacerse valer para intervenir en el procedimiento previsto en el artículo anterior.

Homologado el acuerdo correspondiente, se producirá la disolución del contrato de trabajo de los trabajadores inscriptos y los créditos laborales se transferirán a favor de la cooperativa de trabajo convirtiéndose en cuotas de capital social de la misma. El juez fijará el plazo para la inscripción definitiva de la cooperativa bajo apercibimiento de no proceder a la homologación. La cooperativa asumirá todas las obligaciones que surjan de las conformidades presentadas.

El Banco de la Nación Argentina y la Administración Federal de Ingresos Públicos, cuando fueren acreedores de la concursada, deberán otorgar las respectivas conformidades a las cooperativas, y las facilidades de refinanciación de deudas en las condiciones más favorables vigentes en sus respectivas carteras.

Queda exceptuada la cooperativa de trabajadores de efectuar el depósito del veinticinco por ciento (25%) del valor de la oferta prevista en el punto i), inciso 7 del artículo 48 y, por el plazo que determine la autoridad de aplicación de la ley 20.337, del depósito del cinco por ciento (5%) del capital suscripto previsto en el artículo 90 de la ley 20.337. En el trámite de constitución de la cooperativa la autoridad de aplicación encargada de su inscripción acordará primera prioridad al trámite de la misma debiéndose concluir dentro de los diez (10) días hábiles.

ARTICULO 14. — Sustitúyese el artículo 129 de la ley 24.522 y sus modificatorias, concursos y quiebras, por el siguiente:

Artículo 129: *Suspensión de intereses*. La declaración de quiebra suspende el curso de intereses de todo tipo. Sin embargo, los compensatorios devengados con posterioridad que correspondan a créditos amparados con garantías reales pueden ser percibidos hasta el límite del producido del bien gravado después de pagadas las costas, los intereses preferidos anteriores a la quiebra y el capital. Asimismo, tampoco se suspenden los intereses compensatorios devengados con posterioridad que correspondan a créditos laborales.

ARTICULO 15. — Sustitúyese el artículo 187 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el siguiente:

Artículo 187: *Propuestas y condiciones del contrato*. De acuerdo con las circunstancias el juez puede requerir que se presenten diversas propuestas mediante el procedimiento que estime más seguro y eficiente y que se ofrezcan garantías.

La cooperativa de trabajo de trabajadores del mismo establecimiento podrá proponer contrato. En este caso se admitirá que garantice el contrato en todo o en parte con los créditos laborales de sus asociados pendientes de cobro en la quiebra que éstos voluntariamente afecten a tal propósito, con consentimiento prestado en audiencia ante el juez de la quiebra y con intervención de la asociación sindical legitimada.

La sindicatura fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones contractuales. A estos fines, está autorizada para ingresar al establecimiento para controlar la conservación de los bienes y fiscalizar la contabilidad en lo pertinente al interés del concurso.

Los términos en que el tercero deba efectuar sus prestaciones se consideran esenciales, y el incumplimiento produce de pleno derecho la resolución del contrato. Al vencer el plazo o resolverse el contrato, el juez debe disponer la inmediata restitución del bien sin trámite ni recurso alguno.

ARTICULO 16. — Sustitúyese el primer párrafo del artículo 189 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el siguiente:

Continuación inmediata. El síndico puede continuar de inmediato con la explotación de la empresa o alguno de sus establecimientos, si de la interrupción pudiera resultar con evidencia un daño grave al interés de los acreedores y a la conservación del patrimonio, si se interrumpiera un ciclo de producción que puede concluirse o entiende que el emprendimiento resulta económicamente viable. También la conservación de la fuente de trabajo habilita la continuación inmediata de la explotación de la empresa o de alguno de sus establecimientos, si las dos terceras partes del personal en actividad o de los acreedores laborales, organizados en cooperativa, incluso en formación, la soliciten al síndico o al juez, si aquél todavía no se hubiera hecho cargo, a partir de la sentencia de quiebra y hasta cinco (5) días luego de la última publicación de edictos en el diario oficial que corresponda a la jurisdicción del establecimiento. El síndico debe ponerlo en conocimiento del juez dentro de las veinticuatro (24) horas. El juez puede adoptar las medidas que estime pertinentes, incluso la cesación de la explotación, con reserva de lo expuesto en los párrafos siguientes. Para el caso que la solicitud a que refiere el segundo párrafo el presente, sea una cooperativa en formación, la misma deberá regularizar su situación en un plazo de cuarenta (40) días, plazo que podría extenderse si existiesen razones acreditadas de origen ajeno a su esfera de responsabilidad que impidan tal cometido.

ARTICULO 17. — Sustitúyese el artículo 190 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el siguiente:

Artículo 190: *Trámite común para todos los procesos.* En toda quiebra, aun las comprendidas en el artículo precedente, el síndico debe informar al juez dentro de los veinte (20) días corridos contados a partir de la aceptación del cargo, sobre la posibilidad de continuar con la explotación de la empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos y la conveniencia de enajenarlos en marcha. En la continuidad de la empresa se tomará en consideración el pedido formal de los trabajadores en relación de dependencia que representen las dos terceras partes del personal en actividad o de los acreedores laborales quienes deberán actuar en el período de continuidad bajo la forma de una cooperativa de trabajo. A tales fines deberá presentar en el plazo de veinte (20) días, a partir del pedido formal, un proyecto de explotación conteniendo las proyecciones referentes a la actividad económica que desarrollará, del que se dará traslado al síndico para que en plazo de cinco (5) días emita opinión al respecto. El término de la continuidad de la empresa, cualquiera sea su causa, no hace nacer el derecho a nuevas indemnizaciones laborales. El informe del síndico debe expedirse concretamente sobre los siguientes aspectos:

- 1) La posibilidad de mantener la explotación sin contraer nuevos pasivos, salvo los mínimos necesarios para el giro de la explotación de la empresa o establecimiento;
- 2) La ventaja que resultaría para los acreedores de la enajenación de la empresa en marcha;
- 3) La ventaja que pudiere resultar para terceros del mantenimiento de la actividad;
- 4) El plan de explotación acompañado de un presupuesto de recursos, debidamente fundado;
- 5) Los contratos en curso de ejecución que deben mantenerse;
- 6) En su caso, las reorganizaciones o modificaciones que deben realizarse en la empresa para hacer económicamente viable su explotación;
- 7) Los colaboradores que necesitará para la administración de la explotación;
- 8) Explicar el modo en que se pretende cancelar el pasivo preexistente.

En caso de disidencias o duda respecto de la continuación de la explotación por parte de los trabajadores, el juez, si lo estima necesario, puede convocar a una audiencia a los intervinientes en la articulación y al síndico, para que comparezcan a ella, con toda la prueba de que intenten valerse.

El juez, a los efectos del presente artículo y en el marco de las facultades del artículo 274, podrá de manera fundada extender los plazos que se prevén en la ley para la continuidad de la empresa, en la medida que ello fuere razonable para garantizar la liquidación de cada establecimiento como unidad de negocio y con la explotación en marcha.

ARTICULO 18. — Sustitúyese el artículo 191 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el siguiente:

Artículo 191: La autorización para continuar con la actividad de la empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos será dada por el juez en caso de que de su interrupción pudiera emanar una grave disminución del valor de realización, se interrumpiera un ciclo de producción que puede concluirse, en aquellos casos que lo estime viable económicamente o en resguardo de la conservación de la fuente laboral de los trabajadores de la empresa declarada en quiebra.

En su autorización el juez debe pronunciarse explícitamente por lo menos sobre:

- 1) El plan de la explotación, para lo cual podrá hacerse asesorar por expertos o entidades especializadas;
- 2) El plazo por el que continuará la explotación; a estos fines se tomará en cuenta el ciclo y el tiempo necesario para la enajenación de la empresa; este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por resolución fundada;
- 3) La cantidad y calificación profesional del personal que continuará afectado a la explotación;
- 4) Los bienes que pueden emplearse;
- 5) La designación o no de uno o más coadministradores; y la autorización al síndico para contratar colaboradores de la administración;
- 6) Los contratos en curso de ejecución que se mantendrán; los demás quedarán resueltos;
- 7) El tipo y periodicidad de la información que deberá suministrar el síndico y, en su caso, el coadministrador o la cooperativa de trabajo.

Esta resolución deberá ser dictada dentro de los diez (10) días posteriores a la presentación del informe de la sindicatura previsto en el artículo 190. La resolución que rechace la continuación de la explotación es apelable por el síndico y la cooperativa de trabajo.

ARTICULO 19. — Incorpórase como artículo 191 bis de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el siguiente texto:

Artículo 191 bis: En toda quiebra que se haya dispuesto la continuidad de la explotación de la empresa o de alguno de sus establecimientos por parte de las dos terceras partes del personal en actividad o de los acreedores laborales, organizados en cooperativas, incluso en formación, el Estado deberá brindarle la asistencia técnica necesaria para seguir adelante con el giro de los negocios.

ARTICULO 20. — Sustitúyese el artículo 192 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el siguiente:

Artículo 192: *Régimen aplicable.* De acuerdo a lo que haya resuelto el juez, el síndico, el coadministrador o la cooperativa de trabajo, según fuera el caso, actuarán de acuerdo al siguiente régimen:

- 1) Se consideran autorizados para realizar todos los actos de administración ordinaria que correspondan a la continuación de la explotación;
- 2) Para los actos que excedan dicha administración, necesitan autorización judicial, la que sólo será otorgada en caso de necesidad y urgencia evidentes;
En dicho caso el juez puede autorizar la constitución de garantías especiales cuando resulte indispensable para asegurar la continuidad de la explotación.
- 3) Las obligaciones legalmente contraídas por el responsable de la explotación gozan de la preferencia de los acreedores del concurso;
- 4) En caso de revocación o extinción de la quiebra, el deudor asume de pleno derecho las obligaciones contraídas legalmente por el responsable de la explotación;
- 5) Sólo podrá disponerse de los bienes afectados con privilegio especial desinteresando al acreedor preferente o sustituyendo dichos bienes por otros de valor equivalente.

En caso que la explotación de la empresa o de alguno de los establecimientos se encuentre a cargo de la cooperativa de trabajo será aplicable el presente artículo, con excepción del inciso 3).

Conclusión anticipada. El juez puede poner fin a la continuación de la explotación antes del vencimiento del plazo fijado, por resolución fundada, si ella resultare deficitaria o, de cualquier otro modo, ocasionare perjuicio para los acreedores.

ARTICULO 21. — Sustitúyese el artículo 195 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el siguiente:

Artículo 195: *Hipoteca y prenda en la continuación de empresa.* En caso de continuación de la empresa, los acreedores hipotecarios o prendarios no pueden utilizar el derecho a que se refieren los artículos 126, segunda parte, y 209, sobre los bienes necesarios para la explotación, en los siguientes casos:

- 1) Cuando los créditos no se hallen vencidos a la fecha de la declaración y el síndico satisfaga las obligaciones posteriores en tiempo debido;
- 2) Cuando los créditos se hallen vencidos a la fecha de la declaración, mientras no cuenten con resolución firme que acredite su calidad de acreedor hipotecario o prendario;
- 3) Cuando exista conformidad del acreedor hipotecario o prendario para la suspensión de la ejecución.

Son nulos los pactos contrarios a las disposiciones de los incisos 1) y 2).

Por decisión fundada y a pedido de la cooperativa de trabajadores, el juez de la quiebra podrá suspender las ejecuciones hipotecarias y/o prendarias por un plazo de hasta dos (2) años.

ARTICULO 22. — Incorpórase como último párrafo del artículo 196 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el siguiente:

No será de aplicación el párrafo anterior para el caso de que la continuidad de la explotación sea a cargo de una cooperativa de trabajadores o cooperativa de trabajo.

ARTICULO 23. — Incorpórase como último párrafo del artículo 197 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el siguiente:

No será de aplicación el presente artículo en los casos de continuidad de la explotación a cargo de una cooperativa de trabajadores o sujeto de derecho constituido por trabajadores de la fallida.

ARTICULO 24. — Sustitúyese el artículo 199 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el siguiente:

Artículo 199: *Obligaciones laborales del adquirente de la empresa.* El adquirente de la empresa cuya explotación haya continuado sólo será considerado sucesor del concurso con respecto a los derechos laborales de los trabajadores cuya relación se mantuvo en este período. En consecuencia, no es sucesor del fallido sino en ese concepto y los importes adeudados con anterioridad a la quiebra serán objeto de verificación o pago en el concurso.

En caso de que la adquirente sea la cooperativa de trabajo deberá estarse al régimen de la ley 20.337.

ARTICULO 25. — Modifícase el artículo 201 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 201: *Comité de control.* Dentro de los diez (10) días contados a partir de la resolución del artículo 36, el síndico debe promover la constitución del comité de control que actuará como controlador de la etapa liquidatoria. A tal efecto cursará comunicación escrita a la totalidad de los trabajadores que integren la planta de personal de la empresa y a los acreedores verificados y declarados admisibles, con el objeto que, por mayoría de capital designen los integrantes del comité.

ARTICULO 26. — Modifícase el artículo 203 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 203: *Oportunidad.* La realización de los bienes se hace por el síndico y debe comenzar de inmediato salvo que se haya interpuesto recurso de reposición contra la sentencia de quiebra, haya sido admitida por el juez la conversión en los términos del artículo 90, o se haya resuelto la continuación de la explotación según lo normado por los artículos 189, 190 y 191.

ARTICULO 27. — Incorpórase como artículo 203 bis de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el siguiente:

Artículo 203 bis: Los trabajadores reunidos en cooperativa de trabajo están habilitados para solicitar la adquisición de conformidad con el artículo 205, incisos 1) y 2) y podrán hacer valer en ese procedimiento la compensación con los créditos que le asisten a los trabajadores de la fallida, de conformidad a los artículos 241, inciso 2) y 246, inciso 1) de la ley concursal, no siendo aplicable en este caso la prohibición del artículo 211. El monto de las indemnizaciones será calculado, a los fines de la compensación, de conformidad con el artículo 245 de la ley 20.744 (t.o. 1976), los estatutos especiales, convenios colectivos o contratos individuales, según el que resultare más favorable a los trabajadores. A tal efecto, podrán utilizarse total o parcialmente los créditos laborales de los que resulten titulares trabajadores que voluntariamente los cedan a la cooperativa. La cesión se materializará en audiencia a celebrarse ante el juez de la quiebra con

intervención de la asociación sindical legitimada. El plazo del pago del precio podrá estipularse al momento de efectuarse la venta.

ARTICULO 28. — Sustitúyese el artículo 205 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el siguiente:

Artículo 205: *Enajenación de la empresa.* La venta de la empresa o de uno o más establecimientos, se efectúa según el siguiente procedimiento:

1) El designado para la enajenación, tasa aquello que se proyecta vender en función de su valor probable de realización en el mercado; de esa tasación se corre vista a la cooperativa de trabajadores en caso de que ésta se hubiera formado y al síndico quien, además, informará el valor a que hace referencia el artículo 206;

2) En todos los casos comprendidos en el presente artículo la cooperativa de trabajo podrá realizar oferta y requerir la adjudicación de la empresa al valor de tasación de acuerdo al inciso anterior;

3) La venta debe ser ordenada por el juez y puede ser efectuada en subasta pública. En ese caso deben cumplirse las formalidades del artículo 206 y las establecidas en los incisos 4), 5) y 6) del presente artículo, en lo pertinente;

4) Si el juez ordena la venta, sin recurrir a subasta pública, corresponde al síndico, con asistencia de quien haya sido designado para la enajenación, proyectar un pliego de condiciones en el que debe expresar la base del precio, que será la de la tasación efectuada o la que surja del artículo 206, la que sea mayor, descripción sucinta de los bienes, circunstancias referidas a la locación en el caso en que el fallido fuere locatario, y las demás que considere de interés.

La base propuesta no puede ser inferior a la tasación prevista en el inciso 1). Pueden incluirse los créditos pendientes de realización, vinculados con la empresa o establecimiento a venderse, en cuyo caso debe incrementarse prudencialmente la base. La condición de venta debe ser al contado, y el precio deberá ser íntegramente pagado con anterioridad a la toma de posesión, la que no podrá exceder de veinte (20) días desde la notificación de la resolución que apruebe la adjudicación.

El juez debe decidir el contenido definitivo del pliego, mediante resolución fundada. A tal efecto puede requerir el asesoramiento de especialistas, bancos de inversión, firmas consultoras, u otras entidades calificadas en aspectos técnicos, económicos, financieros y del mercado.

Esta resolución debe ser dictada dentro de los veinte (20) días posteriores a la presentación del proyecto del síndico;

5) Una vez redactado el pliego, se deben publicar edictos por dos (2) días, en el diario de publicaciones legales y en otro de gran circulación en jurisdicción del tribunal y, además, en su caso, en el que tenga iguales características en los lugares donde se encuentren ubicados los establecimientos.

Los edictos deben indicar sucintamente la ubicación y destino del establecimiento, base de venta y demás condiciones de la operación; debe expresarse el plazo dentro del cual pueden formularse ofertas dirigidas en sobre cerrado al tribunal y el día y hora en que se procederá a su apertura. El juez puede disponer una mayor publicidad, en el país o en el extranjero, si lo estima conveniente;

6) Las ofertas deben presentarse en sobre cerrado, y contener el nombre, domicilio real y especial constituido dentro de la jurisdicción del tribunal, profesión, edad y estado civil. Deben expresar el precio ofrecido. Tratándose de sociedades, debe acompañarse copia auténtica de su contrato social y de los documentos que acrediten la personería del firmante.

El oferente debe acompañar garantía de mantenimiento de oferta equivalente al diez por ciento (10%) del precio ofrecido, en efectivo, en títulos públicos, o fianza bancaria exigible a primera demanda;

7) Los sobres conteniendo las ofertas deben ser abiertos por el juez, en la oportunidad fijada, en presencia del síndico, oferentes y acreedores que concurran. Cada oferta debe ser firmada por el secretario para su individualización, labrándose acta. En caso de empate el juez puede llamar a mejorar ofertas.

Las diligencias indicadas en los incisos 1) a 7) de este artículo deben ser cumplidas dentro de los cuatro (4) meses de la fecha de la quiebra, o desde que ella quede firme, si se interpuso recurso de reposición o desde que haya finalizado la continuación según corresponda para cada caso. El juez puede, por resolución fundada, ampliar el plazo en noventa (90) días;

8) A los fines de la adjudicación el juez ponderará especialmente el aseguramiento de la continuidad de la explotación empresarial, mediante el plan de empresa pertinente y la magnitud de la planta de personal que se mantiene en actividad como tutela efectiva de la fuente de trabajo. El plazo para el pago del precio podrá estipularse en el pliego de licitación;

9) Dentro del plazo de veinte (20) días, desde la notificación de la resolución definitiva que apruebe la adjudicación, el oferente debe pagar el precio, depositando el importe. Cumplida esta exigencia, el juez debe ordenar que se practiquen las inscripciones pertinentes, y que se otorgue la posesión de lo vendido. Si vencido el plazo el adjudicatario no deposita el precio, pierde su derecho y la garantía de mantenimiento de oferta. En ese caso el juez adjudica a la segunda mejor oferta que supere la base;

10) Fracasada la primera licitación, en el mismo acto el juez, convocará a una segunda licitación, la que se llamará sin base.

ARTICULO 29. — Sustitúyese el artículo 213 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el siguiente:

Artículo 213: *Venta directa.* El juez puede disponer la venta directa de bienes, previa vista al síndico, a la cooperativa de trabajo para el caso de que ésta sea continuadora de la explotación, cuando por su naturaleza, su escaso valor o el fracaso de otra forma de enajenación resultare de utilidad evidente para el concurso.

En ese caso, determina la forma de enajenación, que puede confiar al síndico o a un intermediario, institución o mercado especializado. La venta que realicen requiere aprobación judicial posterior.

ARTICULO 30. — Sustitúyese el primer párrafo del artículo 217 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el siguiente:

Artículo 217: *Plazos.* Las enajenaciones previstas en los artículos 205 a 213 y 214, parte final, deben ser efectuadas dentro de los cuatro (4) meses contados desde la fecha de la quiebra, o desde que ella queda firme, si se interpuso recurso de reposición. El juez puede ampliar ese plazo en noventa (90) días, por resolución fundada. En caso de continuación se aplicará el plazo establecido en el artículo 191, inciso 2).

ARTICULO 31. — Modifícase el artículo 260 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 260: *Controlador. Comité de control.* El comité provisorio de control en el concurso es un órgano de información y consejo. El comité definitivo es el controlador necesario en la etapa del cumplimiento del acuerdo preventivo, y en la liquidación en la quiebra. Sus integrantes son elegidos por los acreedores por mayoría de capital, y el comité debe ser integrado por un número mínimo de tres (3) acreedores. Asimismo, debe ser integrado por los representantes de los trabajadores, elegidos por los trabajadores de la concursada o fallida. La propuesta de acuerdo preventivo debe incluir la conformación y constitución del comité definitivo de control. El comité constituido para controlar el cumplimiento del acuerdo mantiene sus funciones en caso de declaración de quiebra como consecuencia de incumplimiento del acuerdo.

El comité, provisorio o definitivo, en el concurso tiene amplias facultades de información y consejo. Puede requerir información al síndico y al concursado; exigir la exhibición de libros; registros legales y contables; proponer planes de custodia y conservación del patrimonio del concursado; solicitar audiencias ante el juez interviniente, y cuanta otra medida considere conveniente en la etapa procesal de su actuación. En la etapa de liquidación en la quiebra el comité puede proponer medidas, sugerir a quién debe designarse para efectuar la enajenación de los activos o parte de ellos, fundando su proposición en razones de conveniencia para la mejor realización de los bienes; exigir información a los funcionarios del concurso; solicitar audiencias al juez interviniente y cuanta otra medida considere conveniente en la etapa procesal de su actuación.

Debe informar de su gestión a los acreedores y a los trabajadores de la concursada o fallida con la periodicidad que se indique en el acuerdo, la que no deberá ser inferior a cuatro (4) meses, y mensualmente en la quiebra, confeccionando y colocando a disposición de los mismos el informe en el domicilio que a tal efecto constituyan en el expediente.

El comité deberá emitir opinión para el levantamiento de la inhibición de quien estuviere en etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo, en los casos en que ello fuere necesario en los términos del artículo 60.

La remuneración del comité, si se previera ésta, estará regulada en el acuerdo. En caso de quiebra, será fijada por el juez teniendo en cuenta la naturaleza y extensión de las funciones cumplidas.

El comité provisorio, previsto en el artículo 14, inciso 13, cumplirá funciones informativas y de control en el trámite de acuerdo preventivo hasta su sustitución por el comité de control conformado en el acuerdo. Durante su desempeño tendrá las facultades previstas en el párrafo segundo, primera parte del presente artículo.

Contratación de asesores profesionales. El comité de control podrá contratar profesionales abogados, contadores, auditores, evaluadores, estimadores, tasadores y cualquier otro que considere conveniente, para que lo asista en su tarea con cargo a los gastos del concurso. La remuneración de dichos profesionales será fijada por el juez al momento de homologación del acuerdo, del cumplimiento del acuerdo preventivo, o de la finalización de la liquidación —según haya sido el caso de la actuación de dichos profesionales— en relación con el desempeño cumplido y la labor realizada, no pudiendo resultar dicha remuneración, en su conjunto para todos los intervinientes, superior al medio por ciento (0,50%) del monto de los créditos de los que resulten titulares los miembros del comité, ni inferior a un sueldo de secretario de primera instancia de la jurisdicción en que tramite el concurso o quiebra.

Remoción. Sustitución. La remoción de los integrantes del comité de control se rige por lo dispuesto en el artículo 255. Sin perjuicio de ello, sus integrantes podrán ser sustituidos en cualquier oportunidad por los acreedores, bajo el mismo régimen de mayorías de su designación, excepto los representantes de los trabajadores, que podrán ser sustituidos en cualquier oportunidad por el mismo procedimiento por el que fueron electos.

ARTICULO 32. — Modifícase el artículo 262 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 262: Evaluadores. La valuación de las acciones o cuotas representativas del capital en el caso del artículo 48, estará a cargo de bancos de inversión, entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina, o estudios de auditoría con más de diez (10) años de antigüedad.

Cada cuatro (4) años la Cámara de Apelaciones formará una lista de evaluadores.

De la mencionada lista, el comité de control propondrá una terna de evaluadores, sobre la cual elegirá el juez.

Si no existiese tal lista por falta de inscriptos, el comité de control sugerirá al juez, dos o más evaluadores, que reúnan similares requisitos a los establecidos en el párrafo primero de este artículo, correspondiendo al juez efectuar la designación sobre dicha propuesta.

La remuneración del evaluador la fijará el juez en la misma oportunidad en que regule los honorarios de los demás funcionarios y abogados, y se hará sobre la base del trabajo efectivamente realizado, sin consideración del monto de la valuación.

ARTICULO 33. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A UN DIA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL ONCE.

— **REGISTRADA BAJO EL N° 26.684** — EDUARDO A. FELLNER. — JOSE J. B. PAMPURO. — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada.

▪ **LEY 26.759 DE COOPERADORAS ESCOLARES**

Implementación de acciones. Principios generales. Integración. Funciones, derechos y obligaciones.

Sancionada: Agosto 8 de 2012

Promulgada: Agosto 28 de 2012

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

LEY DE COOPERADORAS ESCOLARES

ARTICULO 1° — El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizan —conforme la Ley de Educación Nacional 26.206— la participación de las familias y de la comunidad educativa en las instituciones escolares en general y, en particular, a través de las cooperadoras escolares, como ámbito de participación de las familias en el proyecto educativo institucional, a fin de colaborar en el proceso educativo de los alumnos y alumnas.

ARTICULO 2° — La implementación de las acciones previstas en la presente ley se regirá por los siguientes principios generales:

- a) Integración de la comunidad educativa.
- b) Democratización de la gestión educativa.

- c) Mejora de los establecimientos escolares.
- d) Fomento de prácticas solidarias y de cooperación.
- e) Promoción de la igualdad de trato y oportunidades.
- f) Promoción de la inclusión educativa.
- g) Defensa de la educación pública.

ARTICULO 3° — Las respectivas jurisdicciones dictarán las normas específicas para promover y regular la creación y el fortalecimiento de las cooperadoras, el reconocimiento de las ya existentes y el seguimiento y control de su funcionamiento. Asimismo, implementarán un registro en cada jurisdicción y establecerán el marco normativo que permita a las cooperadoras escolares la administración de sus recursos.

ARTICULO 4° — Las cooperadoras escolares estarán integradas por padres, madres, tutores o representantes legales de los alumnos y al menos por un (1) directivo, de la institución educativa. Los docentes, los alumnos mayores de dieciocho (18) años de edad y los ex-alumnos de la institución podrán formar parte de la cooperadora, como así también, otros miembros de la comunidad, conforme lo dispongan las reglamentaciones jurisdiccionales.

ARTICULO 5° — Las cooperadoras escolares deberán dictar sus respectivos estatutos regulando su organización y la elección de sus autoridades, debiendo contar como mínimo con un/a presidente/a, un/a secretario/a, un/a tesorero/a. El Estatuto se dictará dando cumplimiento a la reglamentación que establezca cada jurisdicción, según corresponda.

ARTICULO 6° — Las cooperadoras escolares podrán:

- a) Recibir aportes y subsidios que otorguen las autoridades nacionales, provinciales o municipales.
- b) Recibir contribuciones de sus integrantes, las que en ningún caso serán obligatorias para éstos.
- c) Recaudar fondos a través de la realización de actividades organizadas con el consentimiento de las autoridades escolares, así como recibir contribuciones y/o donaciones de particulares, empresas y organizaciones de la sociedad civil. En ningún caso los fondos percibidos por estas contribuciones podrán tener como contrapartida su publicación explicitada en términos publicitarios o propagandísticos del donante.

ARTICULO 7° — Son funciones de las cooperadoras escolares, entre otras, las siguientes:

- a) Participar en las acciones que tiendan a la promoción de la igualdad y el fortalecimiento de la ciudadanía democrática en las instituciones educativas.
- b) Contribuir al mejoramiento de la calidad de las condiciones del espacio escolar, colaborando en el mantenimiento y las mejoras del edificio escolar y su equipamiento.
- c) Realizar actividades culturales, recreativas y deportivas en el marco de los proyectos institucionales del respectivo establecimiento.
- d) Colaborar en la integración e inclusión de sectores de la comunidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad educativa o que estén excluidos de la escolaridad.
- e) Realizar actividades solidarias con otras cooperadoras escolares.
- f) Percibir y ejecutar subsidios destinados al mantenimiento edilicio de los establecimientos educativos, la dotación de mobiliario y equipamiento, la adquisición de útiles, materiales didácticos y bibliográficos.

ARTICULO 8° — El Ministerio de Educación de la Nación diseñará, en coordinación con las autoridades jurisdiccionales, campañas de difusión relativas a la importancia de la cooperación y la participación ciudadana en el ámbito educativo, destacando la función social de las cooperadoras escolares.

ARTICULO 9° — Las cooperadoras escolares podrán nuclearse en consejos de cooperadoras jurisdiccionales, regionales y nacionales. El Ministerio de Educación de la Nación, a través de la reglamentación de la presente ley, dispondrá los mecanismos de participación de estos consejos en el Consejo Consultivo de Políticas Educativas del Consejo Federal de Educación.

ARTICULO 10. — Los derechos y obligaciones emanados en la presente ley no obstan para el ejercicio de la participación de la comunidad en los términos establecidos por los artículos 128 y 129 de la Ley de Educación Nacional 26.206.

ARTICULO 11. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

— REGISTRADO BAJO EL N° 26.759 —

AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Juan H. Estrada. — Gervasio Bozzano.

▪ **Decreto 420/96**

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL

Créase dicho Instituto con la finalidad de promover el surgimiento de nuevas cooperativas y estructuras mutualistas, y la eficiencia de ambos sectores para impulsar la reconversión empresarial y el desarrollo de las economías regionales. Disuélvase el Instituto Nacional de Acción Mutual.

Publicado en Boletín Oficial del 22 de abril de 1996.
Buenos Aires, 15 de abril de 1996

VISTO la Ley N° 24.629, y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada Ley N° 24.629 delega facultades en materia de administración en el Poder Ejecutivo Nacional en los términos del artículo 76 de la constitución Nacional, con el objeto de realizar en su ámbito la reorganización del sector público nacional para lograr una mayor eficiencia y racionalización del mismo, mediante la modificación, fusión, transferencia de organismos a las provincias, previo acuerdo, y la supresión total o parcial de objetivos, competencias, funciones y responsabilidades superpuestas, duplicadas o cuyo mantenimiento se haya tomado manifiestamente innecesario en los términos y con los alcances contenidos en la señalada norma legal.

Que el Instituto Nacional de Acción Cooperativa (INAC), organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Minería e Industria del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, tiene establecidas sus funciones y facultades en las Leyes N° 20.337 y N° 23.427, en lo que a educación y promoción de la actividad cooperativa respecta.

Que el Instituto Nacional de Acción Mutual (INAM), organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación, tiene establecidas sus funciones y actividades en la Ley N° 19.331 y sus modificatorias, y en la ley N° 20.321 y su modificatoria, N° 23.566

Que a ambos institutos les compete ejercer en todo el país la promoción y desarrollo de la acción cooperativa y mutual a través de la asistencia técnica, económica y financiera, y la promoción de la capacitación de directivos y grupos sociales para el mejoramiento de la eficiencia en la administración y prestación de servicios por parte de las cooperativas y mutuales.

Que del análisis realizado en cuanto a objetivos, estructuras y funcionamiento de ambos organismos descentralizados, en el marco de la política de generación de mayor actividad económica y la creación de nuevos puestos de trabajo, surge la necesidad de potenciar desde el Estado las actividades cooperativa y mutual en todo el país.

Que es decisión del Poder Ejecutivo Nacional dar a estas actividades el mayor apoyo y difusión, para lo cual resulta necesario unificar tales cometidos en un único Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual (INACyM).

Que la ejecución de tal decisión permitirá además reducir en forma inmediata los costos operativos y de funcionamiento en tanto el nuevo organismo desarrollará sus actividades en una única sede y con una menor estructura administrativa y de servicios.

Que asimismo la unificación de responsabilidades permitirá ejecutar una política coherente y eficiente tanto para la acción cooperativa como mutual, estableciéndose una

mejor asistencia a ambas actividades en el interior del país, facilitando la debida atención, fiscalización y control, seguimiento, asistencia técnica, capacitación y plena participación de vastos sectores sociales que en la actualidad no disponen de la debida información ni de asesoramiento en la materia.

Que dentro de la acción unificada del Instituto que se propone, adquiere particular relevancia la educación y promoción de la actividad cooperativa y mutual en todo el territorio nacional.

Que resulta de interés del Poder Ejecutivo Nacional que tanto la acción cooperativa como la mutual se desarrollen en todo el país, a efectos de permitir el crecimiento de la actividad económica y laboral tras el objetivo fundamental del pleno en las económicas regionales, como en todas las actividades productivas.

Que el objetivo del Poder Ejecutivo Nacional al crear nuevo Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual (INACYM) es el de promover el surgimiento de nuevas cooperativas y mutuales para lograr niveles crecientes de productividad, favorecer la cooperación entre las cooperativas y las estructuras mutualistas, impulsar la reconversión empresarial y la productividad de las existentes, y hacer más eficientes los sectores cooperativo y mutual para el desarrollo de las economías regionales.

Que a efectos de cumplir los objetivos y acciones predeterminados por las Leyes N°19331, N°20321, N°20337, 23427 y N°23566, el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual (INACyM) deberá elaborar y presentar al Poder Ejecutivo Nacional la correspondiente estructura organizativa mínima indispensable para su correcto funcionamiento, en los términos que establece el presente Decreto.

Que la creación del nuevo organismo y la facultad de aplicar las normas legales correspondientes a cooperativas y mutuales hace necesario que el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual (INACyM) evalúe y proponga al Poder Ejecutivo Nacional un nuevo proyecto de ley que contempla las actividades cooperativas y mutuales en todo el país, con la activa participación de las provincias y municipios, a efectos de darle vigencia a la política nacional de descentralización.

Que el presente decreto se dicta en virtud de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo Nacional por el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional, y la Ley No 24.629.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1°.- Créase, en el ámbito de la Secretaria de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación, el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual (INACyM).

Artículo 2°.- Disuélvese el Instituto Nacional de Acción Cooperativa (INAC), creado por la Ley 20.337 y el Instituto Nacional de Acción Mutual (INAM), creado por la Ley N°19.331 y sus modificatorias.

Artículo 3°.- Asígnase al Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual (INACyM) el cumplimiento de los objetivos y la responsabilidad de la aplicación de lo establecido en las Leyes N° 19331, N° 20.321, N°20.337, N°23.427 y N°23566, y las demás obligaciones y derechos emergentes de las normas que actualmente rigen los Institutos Nacional de Acción Cooperativa y de Acción Mutual, con los alcances determinados en el presente Decreto, y de toda otra norma referida a la actividad cooperativa y/o mutual que pudiera dictarse en el futuro.

Artículo 4°.- La conducción y administración del Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual (INACyM) estará a cargo de un Directorio compuesto por 1 (un) Presidente, 1 (un) Vicepresidente y 6 (seis) Vocales, designados por el Poder Ejecutivo Nacional; 2 (dos) vocales surgirán de las ternas que propongan al Poder Ejecutivo Nacional las entidades cooperativas más representativas, y otros 2 (dos) de las ternas que propagan al Poder Ejecutivo Nacional las entidades mutuales más representativas. El Presidente del Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual (INACyM) convocará a las entidades cooperativas y mutuales para la presentación de tales temas en el plazo de 10 (diez) días corridos a partir de la fecha de asumir sus funciones.

Artículo 5°.- A partir de la asunción del Presidente del Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual (INACyM), cesarán de manera automática en sus funciones los integrantes del Directorio, Consejeros y funcionarios designados por el Poder Ejecutivo Nacional que ocupen cargos extra escalafonarios en el ex Instituto Nacional de Acción Cooperativa (INAC) y el ex Instituto Nacional de Acción Mutual (INAM). Las atribuciones y responsabilidades de ambos organismos disueltos eran ser asumidas por el titular del organismo que se crea por el presente Decreto, en tanto no hayan sido expresamente derogadas por el mismo.

Artículo 6°.- En un plazo de 30 (treinta) días corridos desde la fecha de asumir sus funciones, el Presidente del Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual (INACyM) deberá elevar para su aprobación la estructura organizativa del organismo.

Artículo 7°.- Una vez cubiertos los cargos autorizados en la estructura organizativa que se apruebe, mediante designaciones o contrataciones, el Presidente del Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual (INACyM) deberá elevar al señor jefe de Gabinete de Ministros el listado del personal excedente procedente de las plantas de los ex institutos Nacionales de Acción Cooperativa y de Acción Mutual, cumpliendo con las pautas establecidas en la Ley N° 24.629.

Artículo 8°.- Dentro del plazo de 30 (treinta) días corridos contados a partir de la aprobación de la estructura organizativa, el Presidente del Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual (INACyM) deberá presentar a la Oficina Nacional ley de cooperativas, mutuales y organizaciones de Presupuesto la adecuación presupuestaria programática producto de la reestructuración, que de la aplicación de este Decreto y de sus cambios organizativos, surja, de modo tal que queden reflejados los tipos de actividades a realizar. Como consecuencia de esta reestructuración podrá determinarse aumentos en los subsidios que el Instituto otorga a las cooperativas y mutuales.

Artículo 9°.- Dentro del plazo de 30 (treinta) días corridos contados a partir de la aprobación de la adecuación presupuestaria programática, el Presidente del Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual (INACyM) deberá elevar al Poder Ejecutivo Nacional el proyecto de Programa Anual de Acción Cooperativa y Mutual correspondiente al Ejercicio 1996, el que deberá contener las políticas, objetivos y acciones atinentes al desarrollo y consolidación de las cooperativas y mutuales existentes y/o en formación de todo el territorio nacional, el plan de asistencia financiera para cooperativas y mutuales mediante la utilización de los recursos genuinos que le correspondan al Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual (INACyM) y aquellos que se puedan prever procedentes de créditos nacionales e internacionales.

Artículo 10°.- Transfiérese al Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual (INACyM) la totalidad de los créditos presupuestarios vigentes, activos, pasivos y el personal de los ex Institutos Nacionales de Acción Cooperativa y de Acción Mutual.

Artículo 11°.- Dentro del plazo de 60 (sesenta) días a partir de la fecha de asumir sus funciones el Presidente del Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual (INACyM) deberá:

- a) Reunir en un único lugar físico la actividad del organismo.
- b) Proceder a la desafectación de los bienes muebles o inmuebles sobrantes, conforme a la normativa vigente.
- c) Analizar las políticas tributarias vigentes en la materia de su competencia y proponer a través de la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación las modificaciones que estime pertinentes, conforme los objetivos del Estado Nacional en la materia.

Artículo 12°.- En el término de (90) días corridos de la fecha de asumir sus funciones el Presidente del Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual (INACyM), deberá elevar al Poder Ejecutivo Nacional a través de la secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación un proyecto de ley de cooperativas y mutuales y organizaciones e instituciones públicas y privadas en general vinculadas al movimiento cooperativo y mutual, que contemple el crecimiento y consolidación de estas actividades en todo el país, a partir del principio de descentralización previsto en la Ley N° 24.629.

Artículo 13°.- La Sindicatura General de la Nación controlará el cumplimiento de las acciones establecidas en el presente Decreto, debiendo informar del mismo a la Jefatura de Gabinete de Ministros con la periodicidad que ésta determine.

Artículo 14°.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente medida serán atendidos con imputación a los créditos vigentes en el Presupuesto Nacional Correspondiente al ejercicio 1996 para el ex Instituto Nacional de Acción Cooperativa y el ex Instituto Nacional de Acción Mutua, hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias pertinentes.

Artículo 15°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

▪ **DECRETO 721/00**

VISTO el Expediente N° 75.438/00 del registro del INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (INACyM), el Decreto N° 420 del 15 de abril de 1996, sus similares modificatorios Nros. 471 del 30 de abril de 1996 y 723 del 3 de julio de 1996, y los Decretos Nros. 954 del 16 de agosto de 1996, 1.288 del 4 de noviembre de 1998, 20 del 13 de diciembre de 1999 y 108 del 3 febrero de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que el sector de la economía social, cimentado en los principios de solidaridad, ayuda mutua y equidad social, ha alcanzado un notable nivel de crecimiento que exige la presencia de un organismo del sector público cuya misión primordial sea la de contribuir a su desarrollo.

Que la economía social tiene como pilares fundamentales la acción de las cooperativas y mutuales, cuya promoción y desarrollo desde el Estado Nacional es dirigida por el INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (INACyM), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE, creado por el Decreto N° 420 del 15 de abril de 1996.

Que por las razones expuestas, se considera necesario con el objetivo de satisfacer las necesidades emergentes de dicho sector reformular la conformación y estructura de dicho Instituto, el que pasará a denominarse INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES).

Que resulta menester manifestar el carácter federal en la conformación de las políticas del Instituto y que las mismas se trasuntan en su estructura organizativa, para lo cual resulta necesario proceder a dejar sin efecto las Regiones establecidas por la Resolución INACYM N° 241 del 28 de agosto de 1996 y contempladas por el artículo 2° del Decreto N° 108 del 3 de febrero de 2000, dando mayor énfasis a la acción conjunta de los Organismos Provinciales integrantes del CONSEJO FEDERAL COOPERATIVO Y MUTUAL, a través de una Coordinación General del Consejo Federal y Regionales.

Que la estructura federal proyectada apunta a canalizar la participación de los sectores involucrados en un marco en el que esta participación asegure la máxima transparencia y la consideración, no vinculante, de los intereses de los administrados en las cuestiones de estado sobre las que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES) tiene injerencia.

Que la integración del CONSEJO FEDERAL COOPERATIVO Y MUTUAL al preverse su conformación por funcionarios de los gobiernos provinciales dará un carácter verdaderamente federal a las políticas de estado sobre mutualismo y cooperativismo.

Que, en tanto, el CONSEJO CONSULTIVO HONORARIO al quedar conformado por entidades de segundo y tercer grado, permitirá canalizar los intereses de los sectores en forma amplia así como considerar las posturas técnicas de los máximos referentes del sector cooperativo y mutua, perfeccionando las decisiones del Directorio del Organismo.

Que por otra parte, mediante el Decreto N° 20 del 13 de diciembre de 1999 se ha aprobado la conformación organizativa y objetivos de las Secretarías y Subsecretarías dependientes de la PRESIDENCIA DE LA NACION, JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y de los Ministerios.

Que la referida medida, en su artículo 4°, establece la obligación para cada jurisdicción de presentar una propuesta de estructura organizativa de las unidades de nivel inferior a Subsecretarías hasta el primer nivel operativo.

Que respecto al precitado Instituto, se ha dado cumplimiento a las pautas previstas, proponiéndose la estructura organizativa y la distribución de la planta de personal hasta los niveles requeridos.

Que la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención que le compete, expidiéndose favorablemente.

Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99 inciso 1 de la Constitución Nacional, y los artículos 22 y 26 de la Ley N° 25.237.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Establécese que el INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (INACyM), creado por el Decreto N° 420 del 15 de abril de 1996 y sus modificatorios Nros. 471 del 30 de abril de 1996 y 723 del 3 de julio de 1996, pasará a denominarse INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES), debiendo considerarse sustituida tal denominación cada vez que se hace referencia al Instituto citado en primer término.

ARTICULO 2°.- Sustitúyese el artículo 4° del Decreto N° 420/96, modificado por su similar N° 723/96, por el siguiente:

"ARTICULO 4°.- La conducción y administración del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES) estará a cargo de un Directorio integrado por UN (1) Presidente, DOS (2) vocales en representación del PODER EJECUTIVO NACIONAL, UN (1) vocal en representación de las Asociaciones Mutuales y UN (1) vocal en representación de las Cooperativas.

Los integrantes del Directorio serán designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, los que actúen en representación de las Asociaciones Mutuales y de las Cooperativas serán propuestos por entidades que agrupen a Asociaciones Mutuales y a Cooperativas.

El Directorio sesionará con un quórum integrado por el Presidente y DOS (2) vocales como mínimo. Las decisiones se adoptarán por simple mayoría de votos de los miembros presentes, incluido el Presidente, quien en caso de empate tendrá doble voto.

La representación legal del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES) estará a cargo del Presidente del Directorio. El desempeño de las funciones de Presidente será incompatible con la titularidad o el ejercicio de las funciones de director, administrador, gerente, sindico, mandatario, gestor, profesional o empleado de personas físicas o jurídicas dedicadas a cualquiera de las actividades de competencia del referido Instituto."

ARTICULO 3°.- Apruébanse las atribuciones y funciones del Directorio y del Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES), de conformidad con el detalle obrante en las planillas anexas al presente artículo.

ARTICULO 4°.- Sustitúyese el artículo 1° del Decreto N° 1.288 del 4 de noviembre de 1998, por el siguiente:

"ARTICULO 1°.- Créase, en el ámbito del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES), el CONSEJO CONSULTIVO HONORARIO que será presidido por el Presidente del Instituto, DOS (2) Consejeros en representación del PODER EJECUTIVO NACIONAL, TRES (3) Consejeros en representación de las Asociaciones Mutuales, TRES (3) Consejeros en representación de las Cooperativas, UN (1) Consejero en representación de los profesionales especialistas en Cooperativismo y UN (1) Consejero en representación de los profesionales especialistas en mutualismo.

Los integrantes del Consejo serán designados por el Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES) a propuesta de las entidades representadas.

El Directorio podrá ampliar el número de integrantes de dicho Consejo a solicitud de las entidades o por iniciativa propia cuando esta ampliación resultara imprescindible para el cumplimiento eficaz y eficiente de sus funciones."

ARTICULO 5°.- Sustitúyese el artículo 3° del Decreto N° 1.288 del 4 de noviembre de 1998, por el siguiente:

"ARTICULO 3°.- Serán funciones del CONSEJO CONSULTIVO HONORARIO:

- a) Proponer al Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES) el reglamento de funcionamiento del consejo.
- b) Asesorar al Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES) en la elaboración de planes y programas relacionados con el cumplimiento de los objetivos y las responsabilidades del Instituto.
- c) Evaluar en forma permanente la normativa aplicable a las cooperativas y mutuales, así como sus defectos, proponiendo las modificaciones que considere pertinentes.
- d) Tomar conocimiento y emitir opinión sobre los proyectos de normas del ámbito de responsabilidad del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES).

e) Expedirse, a requerimiento del Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES), sobre cuestiones técnicas de su competencia."

ARTICULO 6º.- Apruébase la estructura organizativa del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES), organismo descentralizado dependiente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE, de acuerdo al Organigrama, Objetivos, Responsabilidades Primarias y Acciones, y Planta Permanente, que como Anexos I, II y IIIa, forman parte integrante del presente Decreto.

ARTICULO 7º.- El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES) deberá presentar la propuesta de estructura organizativa de las aperturas inferiores a las que se aprueban en el presente Decreto, en concordancia con lo establecido por el Decreto N° 1.545/94 reglamentado por la Resolución S.F.P. N° 422/94. Hasta tanto se aprueben, quedarán vigentes las unidades existentes con la asignación de los cargos con funciones ejecutivas, que tenía el INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (INACyM).

ARTICULO 8º.- Créase el CONSEJO FEDERAL COOPERATIVO Y MUTUAL, el que será presidido por el Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES), y estará integrado por los representantes de los Gobiernos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sean titulares de los organismos con competencia en materia cooperativa y mutual. Dicho Consejo tendrá a su cargo los cometidos que se detallan en el Anexo II y la labor de sus integrantes tendrá carácter "ad honorem".

En caso que en una misma jurisdicción provincial la competencia en materia cooperativa y mutual recaiga en organismos diferentes, éstos podrán unificar la representación, o en su defecto votar cada uno los temas de su competencia y unificar la representación y el voto en los temas comunes.

ARTICULO 9º.- Créase el cargo de Coordinador General del CONSEJO FEDERAL Y REGIONALES, con la misión de representar al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES) ante los Organismos Provinciales con competencia en materia cooperativa y mutual, teniendo el carácter de funcionario extraescalafonario, con una retribución equivalente a los conceptos totales correspondientes al cargo de Vocal del Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES).

El Coordinador General del CONSEJO FEDERAL Y REGIONALES será designado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, debiendo el Presidente del Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES) someter a su consideración el nombre del titular propuesto.

ARTICULO 10.- Exceptúase al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES), organismo descentralizado dependiente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE, por única vez de lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley N° 25.237, al sólo efecto de posibilitar la cobertura de los cargos correspondientes a los titulares de las unidades organizativas de primer nivel operativo que se aprueban por el presente Decreto.

Asimismo, facúltase al Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES) a efectuar designaciones de carácter transitorio en los cargos de los titulares de las unidades organizativas referidas en el párrafo anterior, que se creen, que cambien sus competencias o cuyas funciones ejecutivas se encuentren vacantes, como excepción a lo dispuesto por los Títulos III, Capítulo III y IV artículo 71, primer párrafo, primera parte del Anexo I, del Decreto N° 993/91 (t.o. 1995).

Los cargos involucrados deberán ser cubiertos mediante los sistemas de selección previstos en el SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA en el término de CIENTO OCHENTA (180) días de la respectiva designación.

ARTICULO 11.- La designación efectivizada conforme las disposiciones precedentes, deberá en un todo ajustarse a los requisitos mínimos que para el acceso a los niveles escalafonarios de cada agrupamiento se encuentran establecidos en el Título II, Capítulos I, II y III del Anexo I del decreto N° 993/91 (t.o. 1995).

ARTICULO 12.- Deróganse los artículos 2º y 3º del Decreto N° 108 del 3 de febrero de 2000.

ARTICULO 13.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto será atendido con cargo a los créditos de las partidas específicas del Presupuesto de la Entidad 114 – ex INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (INACyM) dependiente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE.

ARTICULO 14.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

- 1.-Dictar su reglamento interno.
- 2.-Verificar el cumplimiento de las obligaciones a que están sujetas las Asociaciones Mutuales, Cooperativas y personas físicas o jurídicas referidas a las competencias del Instituto.
- 3.-Evaluar las proposiciones que efectúen los Institutos o Consejos Provinciales o Regionales y resolver la ejecución de las que considere más conveniente.
- 4.-Evaluar el programa anual del Instituto, los distintos programas de trabajo y el anteproyecto de presupuesto y recursos que estos demanden para su cumplimiento y resolver sobre su elevación al PODER EJECUTIVO NACIONAL.
- 5.-Evaluar periódicamente el cumplimiento de los planes en ejecución, así como las funciones ordinarias que el Organismo desarrolle, proponiendo las correcciones y adaptaciones que estime necesarias.
- 6.-Proponer al Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL la ampliación o creación de delegaciones regionales, como asimismo, su fusión o cierre.
- 7.-Identificar y evaluar situaciones de orden, legal, social, político, económico, organizativo y de cualquier otra índole que fuese necesario modificar para el mejor cumplimiento de los objetivos del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL y resolver al respecto.
- 8.-Establecer el monto de las tasas y aranceles por prestación de servicios que pueda prestar el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL a terceros.
- 9.-Dictar resolución definitiva en lo atinente al reconocimiento de Asociaciones Mutuales y Cooperativas efectuando el otorgamiento, denegatoria o retiro de la personería jurídica para su funcionamiento, como así también su superintendencia y control público.
- 10.-Disponer la intervención de Asociaciones Mutuales en el marco de lo establecido por la legislación vigente, designar o remover interventores y realizar el seguimiento de las intervenciones y del desempeño del interventor.
- 11.-Resolver sobre el otorgamiento de créditos y subsidios por parte del Instituto.
- 12.-Resolver sobre el otorgamiento de becas a técnicos-científicos y funcionarios del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL para realizar cursos de capacitación, sean en el país o en el extranjero.
- 13.-Resolver sobre la constitución de comisiones asesoras "ad honorem", teniendo en cuenta las necesidades del Instituto.
- 14.-Resolver sobre la aceptación de donaciones o subvenciones, legados y contribuciones de cualquier índole que le fueran ofrecidas al ente.
- 15.-Dictar las resoluciones pertinentes para la racionalización de los servicios y el mejor cumplimiento de sus fines pudiendo cuando resultara conveniente para el interés general, delegar alguno de ellos a la competencia provincial o municipal o a la actividad privada en tanto esta delegación no signifique renunciar a facultades expresamente indelegables de su poder de policía, establecido en la legislación pertinente.
- 16.-Dictar resolución definitiva en lo atinente a la aprobación de proyectos de políticas, planes y programas operativos y técnicos que determine el PODER EJECUTIVO NACIONAL o que estén comprendidos en la legislación vigente en materia de su competencia.
- 17.-Designar delegados ad hoc para representar al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL en las reuniones de los Consejos Regionales, como asimismo de los Consejos Provinciales cuya conformación propicie el CONSEJO FEDERAL COOPERATIVO Y MUTUAL.

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

- 1.- Observar y hacer observar el régimen legal que regula el funcionamiento de las Asociaciones Mutuales y las Cooperativas establecido por las Leyes Nros. 20.321 y 20.337 y por las normas que en el futuro se dicten al respecto y sus disposiciones complementarias;
- 2.- Resolver y ejecutar sobre las recomendaciones y resoluciones del Directorio del Instituto, velando por su cumplimiento;
- 3.- Ejercer la presidencia del Directorio del Instituto, convocando a sus sesiones y designar a los miembros de las subcomisiones que el mismo constituya;
- 4.- Ejercer la representación legal del Instituto, la dirección de su administración interna y las actividades de índole económico, financiero y patrimonial;
- 5.- Mantener las relaciones del Instituto con autoridades nacionales, provinciales y municipales, pudiendo para tales fines delegar en funcionarios responsables, las facultades necesarias para un eficiente funcionamiento operativo;
- 6.- Aplicar sanciones disciplinarias, aceptar renunciaciones y disponer traslados del personal del Instituto, de conformidad a la legislación y reglamentación vigente;
- 7.- Elevar al PODER EJECUTIVO NACIONAL el presupuesto anual del organismo y el correspondiente al plan analítico, anual de obras y trabajos públicos, sus modificaciones y reajustes según lo resuelto por el Directorio;
- 8.- Elaborar planes de acción y dirigir el control de gestión del INAES para lograr niveles adecuados de operatividad y eficiencia;
- 9.- Aplicar los regímenes de retribuciones, licencias, movilidad del personal del Instituto y los gastos de representación de sus miembros de conformidad con la normativa vigente;
- 10.- Proponer al PODER EJECUTIVO NACIONAL los proyectos de leyes y de decretos, referidos a materias de competencia del Instituto y que hagan a su administración económica y técnica;
- 11.- Otorgar los poderes necesarios a favor de los abogados del INAES para representar al Organismo en los juicios en que éste sea parte, pudiendo absolver posiciones de oficio en los litigios en que el servicio sea parte, no estando obligado a comparecer personalmente. Constituirse como querellante en causas penales en representación del Instituto;
- 12.- Dictar resolución definitiva en lo atinente a la fijación de intereses punitivos y moratorias o sanciones que se deban aplicar a los deudores o infractores por incumplimiento de las normas legales vigentes de las que el Instituto es autoridad de aplicación;
- 13.- Solicitar a la autoridad judicial el allanamiento de domicilios e incautación de libros y papeles comerciales, inclusive la correspondencia de las Asociaciones Mutuales, Cooperativas, personas y sociedades sometidas a las normas legales vigentes de las que el Instituto es autoridad de aplicación;
- 14.- Dictar resolución definitiva en lo atinente a la aplicación de penalidades por infracción a las leyes y reglamentaciones cuyos regímenes son de competencia del Instituto;
- 15.- Representar al Instituto como máxima autoridad en el orden nacional e internacional en reuniones, conferencias, congresos, jornadas, convenios y acuerdos;
- 16.- Autorizar comisiones oficiales, sean en el orden nacional o en el exterior y que estén contempladas en el presupuesto anual del ente;
- 17.- Celebrar convenios de colaboración con personas de existencia visible, jurídicas, públicas o privadas sean nacionales o internacionales con aprobación previa del Directorio;
- 18.- Designar al personal de la planta permanente o transitoria, de conformidad a los requisitos que establezca la legislación vigente.

ANEXO II

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES)

OBJETIVOS

- 1.- Ejercer en el ámbito nacional las funciones que le competen al Estado Nacional como autoridad de aplicación del régimen legal que regula el funcionamiento de las Asociaciones Mutuales y las Cooperativas establecido por las Leyes Nros. 20.321 y 20.337, sus modificatorias y complementarias y por las normas que en el futuro se dicten al respecto.

- 2.-Fomentar el desarrollo, educación y promoción de la acción cooperativa y mutual en todo el territorio nacional.
- 3.-Reconocer a las Asociaciones Mutuales y Cooperativas efectuando el otorgamiento, denegatoria o retiro de la personería jurídica para su funcionamiento, como así también su superintendencia y control público.
- 4.-Ejercer, con el mismo alcance, el control público y la superintendencia de Asociaciones Mutuales y Cooperativas, fiscalizando su organización, funcionamiento, solvencia, calidad y naturaleza de las prestaciones y servicios y su disolución y/o liquidación.
- 5.-Apoyar, a través de la asistencia técnica, económica y financiera a las entidades y propender a la capacitación de directivos y grupos sociales para el mejoramiento de la eficiencia en la administración y prestación de servicios considerando prioritariamente la atención de sectores o estratos menos favorecidos.
- 6.-Gestionar ante los organismos públicos de cualquier jurisdicción y ante las entidades representativas del mutualismo y del cooperativismo, la adopción de medidas y la formulación de programas y planes que sirvan a los objetivos del Instituto.
- 7.-Elaborar políticas, objetivos y acciones atinentes al desarrollo y consolidación de las Cooperativas y Mutuales, como así también la actualización de la legislación aplicable con la participación de los sectores involucrados.

ANEXO II

ESTRUCTURA CENTRAL

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Responsabilidad Primaria

Cumplir con las funciones asignadas por la Ley N° 24.156, verificando el cumplimiento de políticas, planes y procedimientos establecidos por la autoridad superior, aplicando un modelo de control integral e integrado que deberá abarcar los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos, recursos humanos y de gestión.

ACCIONES

- 1.- Elaborar el Ciclo de Auditoria y los planes anuales de Auditoria que lo conforman.
- 2.- Evaluar el cumplimiento de las políticas planes y procedimientos determinados por la autoridad superior.
- 3.- Constatar la confiabilidad de los antecedentes utilizados con la elaboración de los informes de Auditoría.
- 4.- Comunicar a la autoridad superior y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION los resultados de los informes practicados y de las sugerencias o recomendaciones que se efectúen.
- 5.- Producir informes sobre las auditorias realizadas.
- 6.- Informar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION sobre temas que sean requeridos, en lo atinente al desarrollo de actividades de la Unidad de Auditoría Interna.
- 7.- Evaluar los cambios que se produzcan en el esquema presupuestario del Organismo y su incidencia en la formulación de planes. Verificar si se cumple con los niveles presupuestarios previstos y la normativa legal aplicable.
- 8.- Apreciar el comportamiento técnico-profesional en el desarrollo de las acciones de la Unidad, evaluando los rendimientos individuales y los resultados por programas.

SECRETARIA DE REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS Y MUTUALES

Responsabilidad primaria

Asistir y asesorar al Directorio del Instituto en la formulación y cumplimiento de los objetivos en materia de consultoría legal, registro de cooperativas y mutuales, administración general del organismo y elaboración de su presupuesto.
 Coordinar las acciones sobre consultoría legal y registro con los organismos provinciales competentes en materia cooperativa y mutual.
 Dirigir y supervisar la actividad de los órganos operativos del Instituto en materia administrativa, de apoyo técnico, asistencia legal y registro de cooperativas y mutualidades, en el marco de las políticas que se fijen y deban ser ejecutadas por dichos órganos.

ACCIONES

1. Entender en la sistematización de la actividad registral con jurisdicción nacional de las Cooperativas y Mutuales.
2. Supervisar la formulación del presupuesto anual, erogaciones y cálculo de recursos del Instituto y financiamiento externo.
3. Proponer proyectos de políticas, planes y programas operativos del área de su competencia, evaluar y compatibilizar sus resultados.
4. Dirigir las acciones de su competencia, supervisando el correcto y ágil cumplimiento.
5. Asistir al Directorio en la recopilación de información, investigaciones y estudios necesarios para la formulación de los planes del área de su competencia.
6. Planificar y asesorar sobre la estructura organizativa del Instituto.

GERENCIA DE REGISTRO Y LEGISLACION

Responsabilidad primaria

Dirigir la asesoría jurídica del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES) y la actividad registral con jurisdicción nacional de las Cooperativas y Mutuales.

ACCIONES

1. Llevar el Registro Nacional de asociaciones cooperativas y mutuales.
2. Efectuar el análisis previo de legalidad de las actuaciones vinculadas con inscripciones en el Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales.
3. Elaborar proyectos y anteproyectos en materia de legislación cooperativa y mutual.
4. Ejercer la representación y el patrocinio legal del Estado Nacional en las causas judiciales en las que el Instituto deba tomar intervención y promover las acciones legales pertinentes ante el incumplimiento de la legislación vigente en materia cooperativa y mutual y de los convenios celebrados.
5. Tramitar los pedidos de informes judiciales, administrativos o de terceros sobre las cuestiones de su competencia.
6. Dictaminar en las cuestiones de orden jurídico que se sustancien en el Organismo.
7. Evacuar consultas y asesorar a cooperativas y mutuales y sus asociados sobre cuestiones legales.
8. Actuar como denunciante o querellante cuando se verifique la comisión de hechos que pudieren constituir delitos.
9. Entender en los pedidos de órdenes de allanamiento y medidas precautorias requeridas para el cumplimiento de las medidas de fiscalización previstas en las Leyes Nros. 20.337 y 20.321.
10. Instruir sumarios sobre cuestiones patrimoniales y disciplinarias.

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Responsabilidad primaria

Dirigir, coordinar y supervisar la recaudación del Instituto y la gestión de los asuntos administrativo-contables, patrimoniales, de recursos humanos y de servicios de mantenimiento.

ACCIONES

1. Realizar la recaudación del Instituto, verificar el cumplimiento de las metas previstas, evaluando los desvíos y proponiendo las medidas tendientes a su optimización.
2. Asistir a la autoridad superior en la elaboración del presupuesto, y definir y supervisar los procedimientos administrativo-contables tendientes a la registración y control de su ejecución física y financiera.
3. Dirigir y supervisar el despacho, protocolización y archivo de los actos y actuaciones que tramiten en el Instituto, como así también todo lo concerniente al servicio de mantenimiento, registraciones contables y patrimoniales.
4. Dirigir la administración y el control de los apoyos financieros y subsidios que otorgue el organismo a las entidades cooperativas y mutuales.
5. Dirigir la administración de los recursos informáticos y determinar las necesidades de equipamiento a fin de satisfacer los requerimientos de la entidad.
6. Administrar las políticas y la aplicación de las normas que regulan la carrera administrativa del personal.
7. Administrar los recursos humanos, interviniendo en la aplicación de los regímenes laborales pertinentes, selección de personal, capacitación y evaluación de desempeño.
8. Intervenir en todo proyecto de ley, de decreto y de otros actos administrativos vinculados con el régimen económico-financiero, patrimonial y salarial del personal.

9. Disponer actos vinculados con los servicios administrativos, la compra o venta de bienes, la locación de servicios u obras y el control patrimonial de conformidad con la normativa vigente en la materia.
10. Proponer y realizar los programas de difusión del Organismo.

SECRETARIA DE CONTRALOR

Responsabilidad primaria

Asistir al Directorio del Instituto en la formulación y cumplimiento de los objetivos y acciones relativos a la fiscalización pública de las cooperativas y mutuales.
Coordinar la fiscalización pública con los organismos provinciales con competencia en la materia.

Dirigir y supervisar la actividad de los órganos operativos del INAES en materia de fiscalización y control, en el marco de las políticas que se fijen y deban ser ejecutadas por dichos órganos.

ACCIONES

1. Proponer proyectos de políticas, planes y programas operativos del área de su competencia, evaluar y compatibilizar sus resultados.
2. Dirigir las acciones de su competencia supervisando el correcto control y ágil cumplimiento.
3. Asistir al Directorio en la recopilación de información, investigaciones y estudios necesarios para la formulación de los planes del área de su competencia.

GERENCIA DE INSPECCION

Responsabilidad primaria

Dirigir las acciones de fiscalización del cumplimiento de los regímenes legales que regulan el funcionamiento de las mutuales y las cooperativas establecidos por las Leyes Nros 20.321 y 20.337 y por las normas que en el futuro se dicten al respecto.

ACCIONES

1. Ordenar las inspecciones administrativas, contables y financieras.
2. Realizar la supervisión de las asambleas para verificar el cumplimiento de la reglamentación vigente, los estatutos sociales, reglamentos y demás normas aplicables.
3. Analizar y controlar la documentación que legal y reglamentariamente deben remitir las cooperativas y mutuales y realizar las observaciones e intimaciones pertinentes.
4. Efectuar la rúbrica de los libros sociales y contables que las cooperativas y mutuales deben llevar según disposiciones legales y reglamentarias.
5. Llevar los legajos de cooperativas y mutuales.
6. Recepcionar denuncias de irregularidades en el funcionamiento de cooperativas y mutuales.
7. Analizar los estados contables y determinar la situación económica y financiera de las cooperativas y mutuales.
8. Realizar el análisis y control de los balances de las cooperativas y mutuales en orden a la verificación del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, estatutarias, contables y técnicas, a fin de resguardar la solvencia económica, financiera y patrimonial de las mismas.
9. Efectuar auditorías contables a cooperativas y mutuales.
10. Evacuar consultas y asesoramientos sobre cuestiones técnico contables, incluyendo aspectos impositivos y previsionales.

GERENCIA DE INTERVENCIONES E INFRACCIONES

Responsabilidad primaria

Dirigir los programas y planes de control de los procesos de intervenciones y liquidaciones, y de instrucción de sumarios.

ACCIONES

1. Supervisar la gestión de las intervenciones a mutuales.
2. Supervisar los procesos de liquidación de cooperativas y mutuales, asegurando el cumplimiento de las normas vigentes en la materia.

3. Instruir sumarios a las cooperativas y mutuales que hubieren infringido la normativa vigente.
4. Ejecutar veedurías a cooperativas y mutuales.
5. Controlar las comisiones normalizadoras que se designen en las mutuales.

SECRETARIA DE DESARROLLO Y PROMOCION

Responsabilidad primaria

Realizar la planificación de los programas relacionados con el desarrollo y fomento cooperativo y mutual, de acuerdo a las políticas, objetivos y acciones definidas por el Directorio del Instituto.

Coordinar las acciones de promoción cooperativa y mutual con los organismos provinciales competentes en dichas materias.

Dirigir, coordinar y supervisar los planes y programas tendientes a la creación de las condiciones adecuadas para la protección, conservación y mejoramiento de los factores que contribuyan a la constitución y fortalecimiento de cooperativas y mutuales.

ACCIONES

1. Proponer proyectos de políticas, planes y programas operativos del área de su competencia, evaluar y compatibilizar sus resultados.
2. Dirigir las acciones de su competencia, supervisando el correcto y ágil cumplimiento.
3. Asistir al Directorio en la recopilación de información, investigaciones y estudios necesarios para la formulación de los planes del Instituto en el área de su competencia.
4. Coordinar los proyectos de planificación de las distintas áreas a fin de efectuar la planificación del Instituto.

GERENCIA DE CAPACITACION Y FOMENTO

Responsabilidad primaria

Dirigir la ejecución y desarrollo de las políticas de promoción cooperativa y mutual.

Dirigir la ejecución de los programas de estudio y capacitación en materia cooperativa y mutual y su inclusión en la enseñanza sistemática y asistemática.

ACCIONES

1. Fomentar la constitución y participación de cooperativas y mutuales en el marco de la política de desarrollo social vigente.
2. Realizar estudios de factibilidad de proyectos de cooperativas que generen polos de desarrollo con emprendimientos productivos y su integración a nivel regional o nacional.
3. Asistir técnicamente la constitución de cooperativas y mutuales.
4. Instrumentar y efectuar medidas de asistencia técnica en las cooperativas y mutuales en las que se detecten falencias operativas y/o institucionales que impidan el normal desenvolvimiento de la entidad, cuando éstas no impliquen expresas infracciones a la normativa vigente.
5. Coordinar las acciones necesarias para elaborar proyectos de afianzamiento o incorporación de nuevos servicios o prestaciones a las asociaciones cooperativas y mutuales.
6. Evaluar los requerimientos de apoyo económico formulados por cooperativas, mutuales e instituciones culturales que realicen actividades afines, considerando su otorgamiento y factibilidad en cada caso.
7. Proponer programas de capacitación cooperativa y mutual dirigidos a la comunidad en general y en su caso a la comunidad educativa.
8. Promover la práctica del cooperativismo y el mutualismo entre instituciones públicas y privadas y la comunidad en general.
9. Entender en la organización de congresos, seminarios, jornadas y eventos relacionados con la promoción del cooperativismo y del mutualismo
10. Asistir a las cooperativas y mutuales de segundo y tercer grado y participar con ellas en la organización de acciones de promoción, integración y capacitación cooperativa y mutual.
11. Proponer programas de educación y capacitación cooperativa y mutual destinados al público en general, cooperativistas, mutualistas y educandos interesados en interiorizarse por los sistemas cooperativo y mutual.

ANEXO II

ESTRUCTURA FEDERAL

COORDINACION GENERAL DEL CONSEJO FEDERAL Y REGIONALES

Responsabilidad primaria

Representar al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL ante los Organismos Provinciales con competencia en materia cooperativa y mutual.

ACCIONES

1. Coordinar el funcionamiento de los Consejos Regionales.
2. Agilizar la implementación de programas en forma conjunta.
3. Obtener una mayor integración entre los diferentes Organismos.
4. Potenciar la tarea del Consejo Federal Cooperativo y Mutual.

CONSEJO FEDERAL COOPERATIVO Y MUTUAL

Responsabilidad primaria

Planificar, coordinar, asesorar y acordar los aspectos de las políticas de estado sobre mutualismo y cooperativismo, que comprometan la acción conjunta de la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de afirmar el desarrollo sostenible de los sectores que integran la economía social, consolidando los valores de solidaridad y ayuda mutua.

ACCIONES

1. Colaborar con el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL en la definición de políticas y la implementación de programas tendientes a impulsar la promoción y el desarrollo cooperativo y mutual.
2. Coordinar y concertar las medidas necesarias para hacer efectivas en las distintas jurisdicciones las políticas adoptadas y las acciones consecuentes.
3. Promover medidas tendientes al logro de una racional utilización de los recursos humanos, económicos y técnicos, por parte de los organismos públicos con competencia en materia cooperativa y mutual.
4. Analizar y evaluar el estado de los movimientos cooperativo y mutual, colaborando en la realización de estudios técnicos y relevamientos estadísticos.
5. Analizar la normativa aplicable a las cooperativas y mutuales en los ámbitos nacional y provincial, elaborando propuestas y proyectos de reforma.
6. Proponer medidas tendientes a la implementación de planes y programas de educación cooperativa y mutual, a través de organismos oficiales e instituciones privadas vinculadas al sector social de la economía.
7. Evaluar periódicamente el cumplimiento de los planes en ejecución a nivel provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las funciones ordinarias que ellas desarrollen, pudiendo proponer las correcciones y adaptaciones que estime necesarias.
8. Identificar y evaluar situaciones de orden legal, social, político, económico, organizativo y de cualquier otra índole que fuese necesario modificar para el mejor cumplimiento de sus funciones, proponiendo las acciones pertinentes.
9. Proponer mecanismos de coordinación para la distribución de recursos que se destinen a educación y promoción cooperativa y mutual.
10. Proponer al Directorio del Instituto la ampliación, modificación o creación de delegaciones locales, como asimismo su fusión o cierre.
11. Propiciar la conformación de consejos provinciales y regionales, mediante los cuales se canalicen las iniciativas del sector a nivel de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
12. Dictar su reglamento interno.

CONSEJOS REGIONALES

Los Consejos Regionales tendrán por misión asistir al Consejo Federal Cooperativo y Mutual en el cumplimiento de sus funciones.

Se integrarán con representantes de los Gobiernos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y serán designados por el Organismo Deliberativo del Consejo Federal Cooperativo y Mutual, a propuesta de los órganos locales integrantes de las respectivas regiones.

Los Consejos regionales se conformarán de la siguiente manera:

- a) Zona I NEA: Chaco, Formosa, Entre Ríos, Misiones y Corrientes.
- b) Zona II NOA: Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Tucumán.
- c) Zona III CUYO: La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis y Mendoza.
- d) Zona IV CENTRO: Córdoba y Santa Fé.
- e) Zona V BUENOS AIRES: Provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- f) Zona VI PATAGONIA: Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

• **Decreto 1171/03**

COOPERATIVAS Y MUTUALES

Declárase de alto interés la enseñanza teórico práctica, en los establecimientos educativos oficiales y privados, de los principios del cooperativismo y del mutualismo. Promoción de la constitución de cooperativas escolares. Participación del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

Bs. As., 15/5/2003

VISTO el expediente N° 4333/02 del registro del MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA, la Ley N° 16.583 y el Decreto N° 2176 del 28 de noviembre de 1986, y CONSIDERANDO:

Que dicha normativa declara y reglamenta la enseñanza de los principios y de la aplicación teórico-práctica del cooperativismo en los planes y programas de estudio en los establecimientos educacionales.

Que las Leyes Nros. 20.321 y 20.337, vigentes en materia de mutuales y cooperativas, priorizan la educación y la capacitación cooperativa y mutual.

Que aún subsisten jurisdicciones en las cuales no se aplica dicha enseñanza.

Que el tiempo transcurrido desde la sanción de la Ley N° 16.583, su no observancia en la práctica, hacen recomendable actualizar la reglamentación de que se trata, en orden a su trascendencia, de alto interés nacional.

Que la grave situación económico-social por la que atraviesa el país, encuentra en el cooperativismo y en el mutualismo una importante estructura asociativa que aporta una salida a la crisis y la esperanza de contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa.

Que junto al cooperativismo, el mutualismo, con sus principios y valores, también ha acompañado el crecimiento de los pueblos desde sus albores de inmigración y colonización.

Que tanto el cooperativismo como el mutualismo, actúan en forma hermanada, en muchos casos atendiendo idénticas necesidades de la población y en otras, actuando en sus específicas funciones, determinadas por las leyes que los rigen.

Que la enseñanza de ambas doctrinas, sus principios, su teoría y su práctica, hacen necesaria su implementación en todos los establecimientos educacionales, como método pedagógico.

Que la formación de docentes y capacitadores en dichas doctrinas, constituye una razón esencial para llevar a buen fin la misión de atender el interés nacional.

Que, asimismo, resultaría conveniente que las autoridades provinciales, a través del CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION, incorporen la educación de los sistemas de cooperativas y mutuales en todos los niveles de enseñanza.

Que, además, es necesario contar con un Registro Nacional de Personerías de Cooperativas y Mutuales Escolares y realizar un censo nacional de las mismas a fin de disponer de información actualizada y permanente.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2°, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Declárase de alto interés la enseñanza teórico práctica, en los establecimientos educativos oficiales y privados, de los principios del cooperativismo y del mutualismo.

Art. 2° — El MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA deberá promover a través del CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION, la incorporación de los principios a que se refiere el artículo anterior, habida cuenta del alto interés que reviste inculcar la doctrina y los métodos cooperativos y mutuales en las nuevas generaciones de argentinos.

Art. 3° — El MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA promoverá la constitución de cooperativas escolares en los establecimientos educativos del país, en los que se imparta la Educación General Básica, Polimodal, Técnica y Terciaria.

Art. 4° — Las cooperativas escolares tendrán por finalidad la educación humanística, histórica, social, económica y cívica de los alumnos y serán integradas, conducidas y administradas por éstos, con el asesoramiento de docentes especialmente capacitados para tal fin.

Art. 5° — Créase en el ámbito del MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA una Comisión Nacional que será presidida por el titular de dicho Ministerio. Actuará como Secretario el Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES). Asimismo, el CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION, la SECRETARIA DE DESARROLLO Y PROMOCION del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES) y las Confederaciones Cooperativas y Mutuales, estarán representados en la citada Comisión con UN (1) integrante por cada uno de ellos. Por el MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA se invitará al HONORABLE CON-GRESO DE LA NACION a designar, en representación de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION, y de las Comisiones de Educación de ambas Cámaras, UN (1) representante para integrar la Comisión a que se refiere el presente artículo.

Art. 6° — Dentro del plazo de TREINTA (30) días, contado a partir de la fecha de publicación del presente decreto, la Comisión que se crea por el artículo 5° deberá iniciar las actividades que se le autorizan.

Art. 7° — Serán funciones de la Comisión creada por el artículo que antecede: a) Difundir y resaltar la importancia y trascendencia del cooperativismo y mutualismo escolar como valor humanístico, histórico, social y económico y cívico de la Nación. b) Elaborar las propuestas de planes y programas de estudio y de actividades prácticas, para la enseñanza-aprendizaje en los establecimientos educativos del cooperativismo y mutualismo. c) Promover la capacitación en cooperativismo y mutualismo de los docentes responsables del desarrollo de contenidos; y acordar con los institutos de formación docente la capacitación pedagógica de los expertos en cooperativismo y mutualismo. d) Confeccionar y proveer modelos de organización y administración de cooperativas y mutuales escolares. e) Propiciar el apoyo económico financiero a las cooperativas y mutuales escolares, por parte de las entidades del sector de la economía solidaria.

Art. 8° — Las entidades cooperativas y mutuales podrán asumir el padrinazgo de cooperativas escolares y colaborar en las celebraciones del “Día Nacional e Internacional del Cooperativismo” y del “Día del Mutualismo” que se celebran el primer sábado de julio y el primer sábado de octubre, respectivamente, de acuerdo con lo que se fije en el calendario escolar respectivo.

Art. 9° — El MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA, y el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES), promoverán en forma conjunta, cursos de capacitación en materia de cooperativas, mutualidades para profesores, maestros y estudiantes de los Institutos de Formación Docente bajo su jurisdicción, destinados al perfeccionamiento y actualización permanente en dichas materias.

Art. 10. — El MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA, y el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES), conformarán un sistema de adjudicación de personería escolar, mediante la emisión de un certificado a las escuelas que hubieran optado por desarrollar cooperativas y mutuales escolares según la normativa vigente.

Art. 11. — Derógase el Decreto N° 2176/86.

Art. 12. — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

DUHALDE. — Alfredo N. Atanasof.— María N. Doga. — Graciela M. Giannettasio.
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL Nº 30.151 1º SECCIÓN
viernes 16 de mayo de 2003.

- **Decreto 1991/2011**

MEDICINA PREPAGA

Modifícase la Ley 26.682

Bs. As., 29/11/2011

VISTO la Ley Nº 26.682, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1º de la Ley Nº26.682 estableció el régimen de regulación de las empresas de medicina prepaga, los planes de adhesión voluntaria y los planes superadores o complementarios por mayores servicios que comercialicen los Agentes del Seguro de Salud (ASS) contemplados en las Leyes Nros. 23.660 y 23.661, quedando excluidas las cooperativas y mutuales, asociaciones civiles y fundaciones y obras sociales sindicales.

Que la regulación del sistema de salud debe necesariamente contemplar la integración y articulación de todos los subsectores involucrados.

Que en virtud de la última parte del precitado artículo 1º, los sujetos allí individualizados — con excepción de las obras sociales regidas por las referidas Leyes Nros. 23.660 y 23.661— se encuentran excluidos de toda regulación y control en lo atinente a la comercialización de planes de salud, siendo que en muchos casos el objeto total o parcial de su actividad consiste en brindar dichos planes.

Que tal circunstancia origina distorsiones en la actividad de la salud y en consecuencia un perjuicio para los usuarios, al existir entidades que no se encuentran obligadas al cumplimiento de las disposiciones de la Ley Nº26.682.

Que por lo tanto, a fin de armonizar el régimen instaurado por la Ley Nº26.682, integrando en condiciones de equidad a la totalidad de los sujetos cuya actividad total o parcial resulta de idéntico objeto, se considera necesario el dictado del presente incorporando al artículo 1º de dicha ley a las cooperativas y mutuales, asociaciones civiles y fundaciones.

Que, asimismo, cabe poner de manifiesto que gran cantidad de obras sociales sindicales comercializan planes de salud de adhesión voluntaria y planes superadores o complementarios por mayores servicios, debiendo equipararse tal situación a la del resto de los agentes del seguro de salud comprendidos en la primera parte del artículo 1º de la Ley Nº26.682.

Que la situación descripta requiere la urgente adopción de las medidas que permitan revertir las exclusiones, distorsiones e inequidades precedentemente señaladas, resultando imposible recurrir al trámite ordinario de formación y sanción de las leyes.

Que la Ley Nº26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Que la citada ley determina que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia, así como elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 20 de la Ley Nº26.122 prevé que, en el supuesto que la Comisión Bicameral Permanente no eleve el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto, de conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Que, por su parte, el artículo 22 de la misma ley dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme a lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.

Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 3, de la CONSTITUCION NACIONAL y por los artículos 2º, 19 y 20 de la Ley Nº26.122.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE
MINISTROS

DECRETA:

Artículo 1º — Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº26.682 por el siguiente:

“ARTICULO 1º.- Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen de regulación de las empresas de medicina prepaga, los planes de adhesión voluntaria y los planes superadores o complementarios por mayores servicios que comercialicen los Agentes del Seguro de Salud (ASS) contemplados en las Leyes Nros. 23.660 y 23.661. Quedan también incluidas en la presente ley las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones cuyo objeto total o parcial consista en brindar prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana a los usuarios, a través de una modalidad de asociación voluntaria mediante sistemas pagos de adhesión, ya sea en efectores propios o a través de terceros vinculados o contratados al efecto, sea por contratación individual o corporativa. En todas aquellas actividades que resulten ajenas a dicho objeto continuarán rigiéndose por los respectivos regímenes que las regulan.”

Art. 2º — El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 3º — Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Aníbal F. Randazzo. — Nilda C. Garré. — Débora A. Giorgi. — Julián A. Domínguez. — Julio M. De Vido. — Amado Boudou — Julio C. Alak. — Carlos A. Tomada. — Alicia M. Kirchner. — Juan L. Manzur. — Alberto E. Sileoni. — José L. S. Baraño. — Héctor M. Timerman. — Carlos E. Meyer. — Arturo A. Puricelli.

- **Decreto Nº 1991/11**

Honorable Cámara de Diputados de la Nación
CONGRESO DE LA NACION
Resolución S/N

Declárase la validez del Decreto Nº 1991/11.

Bs. As., 21/3/2012

Señora Presidenta de la Nación:

Tengo el honor de dirigirme a la señora Presidenta, comunicándole que esta H. Cámara ha aprobado, en sesión de la fecha, la siguiente resolución.

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

RESUELVE:

Artículo 1º — Declarar la validez del Decreto 1991 de fecha 29 de noviembre de 2011.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Dios guarde a la señora Presidenta.

Julián Domínguez. — Gervasio Bozzano.

- **Decreto 1993/2011**

MEDICINA PREPAGA

Reglaméntase la Ley 26.682.

VISTO la Ley N°26.682 y el Decreto N°1991 de fecha 29 de noviembre de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que por las normas citadas se estableció el régimen de regulación de las empresas de medicina prepaga, entendiéndose por ellas a toda persona física o jurídica cuyo objeto consista en brindar prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana a los usuarios, a través de una modalidad de asociación voluntaria mediante sistemas de pagos de adhesión, regulando asimismo los planes de adhesión voluntaria y los planes superadores o complementarios por mayores servicios que comercialicen los Agentes del Seguro de Salud.

Que asimismo se incluyó en el régimen aludido a las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones cuyo objeto total o parcial consista en brindar prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana a los usuarios, a través de una modalidad de asociación voluntaria mediante sistemas de pagos de adhesión, ya sea en efectores propios o a través de terceros vinculados o contratados al efecto, sea por contratación individual o corporativa.

Que, a tales efectos, la normativa mencionada precedentemente fija las pautas referidas a las prestaciones que se deben cubrir; modelos de contratos y sus aspectos legales; aranceles a los prestadores y formas de pago como así también las obligaciones que competen a las partes involucradas y sanciones aplicables por infracciones a la ley.

Que el desenvolvimiento del marco normativo impuesto por la Ley N°26.682 exige una supervisión eficiente y racionalizada, con una clara identificación de sus actores, objetivos, funciones y responsabilidades, que tienda a la unificación dentro del SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD.

Que tal sentido corresponde en esta instancia dictar las normas reglamentarias necesarias que permitan la inmediata puesta en funcionamiento de las previsiones contenidas en la Ley N°26.682 y en el Decreto N°1991 de fecha 29 de noviembre de 2011.

Que han tomado la intervención de su competencia los Servicios Jurídicos del MINISTERIO DE SALUD y de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º — Apruébase la reglamentación de la Ley N° 26.682 que, como Anexo, forma parte del presente Decreto.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Alicia M. Kirchner. — Juan L. Manzur.

ANEXO

REGLAMENTACION DE LA LEY N°26.682

ARTICULO 1º.- Quedan expresamente incluidas en la Ley N°26.682:

- a) Las Empresas de Medicina Prepaga definidas en el artículo 2º de la Ley.
- b) Las obras sociales comprendidas en el artículo 1º de la Ley N°23.660 y las entidades adheridas o que en el futuro se adhieran como agentes del seguro al Sistema Nacional del Seguro de Salud regulado en la Ley N°23.661, por los planes de salud de adhesión voluntaria individuales o corporativos, superadores o complementarios por mayores servicios médicos que comercialicen. En todo lo demás dichas entidades continuarán rigiéndose por los respectivos regímenes que las regulan.
- c) Las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones con los alcances establecidos en el segundo párrafo del artículo 1º de la Ley.

ARTICULO 2º.- Sin reglamentar.

ARTICULO 3º.- Las personas designadas como titulares, fundadores, directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, síndicos, liquidadores o

gerentes de las entidades de la Ley N°26.682, previamente deberán suministrar a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD la siguiente documentación:

- a) Certificado emitido por la Inspección General de Justicia (I.G.J.) que acredite no encontrarse comprendido por las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el artículo 264 de la Ley N°19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias, de Sociedades Comerciales.
- b) Certificación de antecedentes emitida por el Registro de Juicios Universales.
- c) Acreditación del domicilio real expedido por la Policía de la jurisdicción de residencia.
- d) Certificado de inhibición general de bienes expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble con jurisdicción en el domicilio del interesado.
- e) Certificado de Antecedentes Penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.

ARTICULO 4°.- El MINISTERIO DE SALUD es la Autoridad de Aplicación de la Ley N°26.682, a través de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado de su jurisdicción.

ARTICULO 5°.-

a) La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD designará síndicos, auditores y veedores, que tendrán por cometido la fiscalización y control de los actos de los órganos y funcionarios de los sujetos indicados en el artículo 1° vinculados con el cumplimiento de las normas y disposiciones de la Ley N°26.682 y de esta reglamentación. Estas sindicaturas, auditorías y/o veedurías serán asignadas a cada entidad en la oportunidad, condiciones y objetivos de supervisión y control que para cada caso disponga la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y podrán ser individuales o colegiadas según lo establezca la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y, cada una de ellas, podrá abarcar a más de una entidad. Su actuación será rotativa con un máximo de CUATRO (4) años de funciones en una misma entidad. Los síndicos, auditores y veedores podrán ser removidos por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y percibirán la remuneración que la misma determine, con cargo a su presupuesto. La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD establecerá las normas referidas a las atribuciones y funcionamiento de las sindicaturas, auditorías y veedurías.

b) 1. El Registro Nacional de los sujetos comprendidos en el artículo 1° de la Ley, se denominará REGISTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE MEDICINA PREPAGA (R.N.E.M.P).

Deben inscribirse en el Registro: i) Las empresas de medicina prepaga definidas en el artículo 2° de la Ley; ii) Las obras sociales comprendidas en el artículo 1° de la Ley N°23.660, y las entidades adheridas o que en el futuro se adhieran como Agentes del Seguro al SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD regulado en la Ley N°23.661, que comercialicen planes de salud de adhesión voluntarios (individuales o corporativos), superadores y/o complementarios por mayores servicios médicos y iii) Las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones, con los alcances del segundo párrafo del artículo 1° de la Ley.

2. El Padrón Nacional de Usuarios se creará con la información proporcionada por las entidades que obligatoriamente deben inscribirse en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga. El Padrón de Usuarios de cada entidad será exigido como recaudo formal a los fines de obtener su inscripción en el Registro.

La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD establecerá las características que deberá reunir el Padrón de Usuarios y los datos de cada uno de los usuarios y los integrantes de sus respectivos grupos familiares que se deberán consignar en el padrón, procurando crear una base unificada de todos los beneficiarios del sistema de salud privada para que, cuidando la confidencialidad de los datos, sea utilizado por el sistema público de salud a fin de identificar a las personas con padecimientos y las prestaciones a las que acceden (Resolución ex MSyAS N°394/94, Ley N°15.465 "Régimen Legal de las Enfermedades de Notificación Obligatoria" y Decreto N°3640/64).

La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD determinará el sistema y periodicidad para la actualización de los padrones con la información de altas y bajas que se produzcan.

c) A los fines de obtener la inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, aquellas entidades que obligatoriamente deben inscribirse suministrarán la siguiente información:

- 1. Padrón actualizado de usuarios discriminando titulares, grupo familiar primario, personas a cargo y personas comprendidas en el artículo 14 inciso b) de la Ley.
- 2. Distribución territorial por jurisdicción de los usuarios de la cobertura prestacional brindada por la entidad.

3. Modelos de contratos a suscribir con los usuarios, en todas las modalidades de contratación y planes, en los términos del artículo 8º de la Ley.
 4. Composición del patrimonio e inventario de los bienes.
 5. Ultimos TRES (3) estados contables aprobados.
 6. Cobertura prestacional-médico-asistencial, Planes de extensión de coberturas y programas y otras prestaciones.
 7. Estatuto, Contrato Social y/o Convenio de Adhesión al Sistema de la Ley Nº23.661 si correspondiere.
 8. Estructura orgánico-funcional, y estructura de gastos administrativos. Las entidades indicadas en el artículo 1º, inciso b) de la presente reglamentación deberán, además, acreditar su inscripción en el registro respectivo, como Obra Social (Ley Nº23.660) o Agente del Seguro (Ley Nº23.661), según corresponda.
- La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD fijará un plazo de hasta TREINTA (30) días hábiles contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de inscripción dentro del cual cada entidad deberá completar la información antes detallada. Durante ese lapso la inscripción revestirá el carácter de provisoria.
- La información suministrada deberá ser actualizada con la periodicidad que establezca la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.
- La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD podrá disponer la cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga a pedido de las mismas. También podrá disponer cancelaciones cuando deriven de la aplicación del régimen sancionatorio dispuesto en el artículo 24, inciso c) de la Ley, previa sustanciación del respectivo sumario administrativo.
- La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD determinará las condiciones técnicas, de solvencia financiera, de capacidad de gestión y prestacional, además de otros recaudos formales, que serán exigibles a las entidades para su inscripción en el Registro previsto en el artículo 5º, inciso b) de la Ley.
- d) La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD deberá establecer los sistemas de información y modelos informáticos y de gestión necesarios para la fiscalización de las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO) y las del Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad (Ley Nº24.901) y de cualquier otra que se incorpore al contrato suscripto con los usuarios bajo el modelo autorizado.
- Facúltase a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD para requerir toda información necesaria y hacer cumplir dicho requerimiento por parte de cualquiera de las entidades fiscalizadas.
- e) La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD controlará el cumplimiento de los recaudos exigidos a las entidades para obtener su inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga. En todos los casos la inscripción será dispuesta por acto del Superintendente de Servicios de Salud e implicará la autorización para funcionar como Entidad de Medicina Prepaga, debiendo dejarse constancia de tal implicancia en el respectivo acto resolutivo.
- Ninguna entidad sin autorización para funcionar como Entidad de Medicina Prepaga, podrá brindar prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana a los usuarios, a través de una modalidad de asociación voluntaria mediante sistemas pagos de adhesión, ya sea en efectores propios o a través de terceros vinculados o contratados al efecto, sea por contratación individual o corporativa. De comprobarse fehacientemente el incumplimiento de esta disposición, la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD lo pondrá en conocimiento de las autoridades competentes y procederá a formular la denuncia penal si correspondiere.
- f) En oportunidad de solicitar su inscripción en el Registro, las entidades incluidas en la ley deberán presentar, para fiscalización y autorización de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, los modelos de contratos a suscribir con los usuarios, en todas las modalidades de contratación y planes, en los términos del artículo 8º de la Ley. La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD resolverá dentro de los TREINTA (30) días hábiles inmediatos a su presentación la aprobación, observaciones o rechazo de los modelos contractuales referidos.
- Las entidades que pretendan efectuar modificaciones en los modelos de contratos aprobados por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, deberán presentar previamente ante dicho Organismo los cambios que intenten introducir, para su autorización.
- g) Las cuotas que deberán abonar los usuarios se autorizarán conforme las pautas establecidas en el artículo 17 del presente.
- Las entidades que pretendan aumentar el monto de las cuotas que abonan los usuarios, deberán presentar el requerimiento a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, la que lo elevará al Ministro de Salud para su aprobación, previo dictamen vinculante de la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.

Las entidades deberán, una vez autorizado dicho aumento, informar a los usuarios los incrementos que se registrarán en el monto de las cuotas con una antelación no inferior a los TREINTA (30) días hábiles, contados a partir de la fecha en que la nueva cuota comenzará a regir. Se entenderá cumplimentado el deber de información al que se refiere el presente apartado, con la notificación incorporada en la factura del mes precedente y/o carta informativa.

h) La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD procederá a circularizar, con una periodicidad no mayor a un cuatrimestre el listado de los efectores indicados en el artículo 5º, inciso h) de la Ley, que sean consignados como acreedores en los informes económico financieros que deben ser presentados por los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente reglamentación, a efectos de que exterioricen sus acreencias.

La autoridad de aplicación, con los resultados obtenidos, procederá al relevamiento de aquellas prestaciones impagas que invoquen y acrediten los efectores mencionados.

En caso de detectarse crédito a favor de un efector público se cursará reclamo al deudor, correspondiendo se resuelva la situación dentro de un plazo máximo de TREINTA (30) días hábiles desde el reclamo. La omisión de la cancelación de las facturas adeudadas hará pasible al deudor de la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N°26.682.

i) Aquellos sujetos del artículo 1º que revistan forma societaria deberán presentar: Balance General de cierre de ejercicio con Dictamen de Contador Público Independiente y Estados Intermedios con Informe Profesional, a los CUATRO (4) y OCHO (8) meses del inicio del ejercicio económico.

El resto de los sujetos deberán presentar: un informe cuatrimestral que contenga los ingresos percibidos y las erogaciones efectuadas y un informe anual que dé cuenta de los bienes afectados a la actividad y de las deudas generadas por la misma.

En ambos casos deberán acompañar detalle pormenorizado de los efectores médico asistenciales que integren el pasivo de la entidad y los montos adeudados.

j) La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD dictará las normas que resulten pertinentes relacionadas con la facultad de impartir instrucciones, fijar criterios y señalar los procedimientos que determinen las reglas aplicables a la atención al usuario, trámite de peticiones y reclamos por incumplimiento del servicio.

k) La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD dictará las normas pertinentes a fin de establecer el sistema de categorización y acreditación de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente.

l) La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD dictará las normas complementarias para requerir a los sujetos mencionados en el artículo 1º de la presente reglamentación, los datos demográficos, epidemiológicos y estadísticos de prestaciones médicas realizadas por los prestadores contratados, como también datos de los distintos planes de prevención y detección de patologías de acuerdo con la normativa de realización y ejecución de la cobertura, dentro del marco teórico y los objetivos generales y específicos, con la definición de población bajo programa, así como de acciones y metas con las correspondientes evaluaciones programáticas.

m) La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD dictará las normas necesarias a fin de decidir la reasignación de los usuarios afectados en masa en aquellas empresas con programas y cuota equiparable a los de la entidad desaparecida, según la categorización y acreditación que a dicho efecto realice la autoridad de aplicación respecto de los sujetos incluidos en el artículo 1º de esta reglamentación. En dichos supuestos se deberán respetar criterios de distribución proporcional según cálculo actuarial y contar con el consentimiento del usuario.

ARTICULO 6º.- Los Ministros de Salud y de Economía y Finanzas Públicas propondrán al PODER EJECUTIVO NACIONAL para su designación los representantes de sus respectivas jurisdicciones que integrarán la Comisión Permanente. El PODER EJECUTIVO NACIONAL, asimismo, designará entre ellos al Presidente de la Comisión.

La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD dictará las normas para la constitución y funcionamiento de la Comisión Permanente.

La Comisión Permanente elaborará su propio reglamento de funcionamiento el que será aprobado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.

Los integrantes de la Comisión Permanente actuarán “ad-honorem”.

ARTICULO 7º.- Los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la Ley N°26.682, deben cubrir como mínimo en sus planes de cobertura médico asistencial el Programa Médico Obligatorio (P.M.O.) en vigencia.

Estas entidades sólo podrán ofrecer planes de cobertura parciales en los casos de los incisos a), b) y c) del artículo 7º de la Ley, de acuerdo con los requerimientos de la Autoridad de Aplicación y las autoridades jurisdiccionales.

En todos los casos en los que los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la Ley se encuentren autorizados a ofrecer planes de coberturas parciales se deberán explicitar claramente las prestaciones cubiertas y detallar pormenorizadamente las excluidas de la cobertura, no pudiendo hacer referencias genéricas respecto de enfermedades de escasa aparición.

En el caso de las Cooperativas y Mutuales que estén prestando servicios de salud en cumplimiento de la normativa vigente y bajo la supervisión del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL podrán continuar prestándolos, pero deberán inscribirse en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga. La Autoridad de Aplicación a los fines de la autorización definitiva dará intervención vinculante a dicho Instituto, debiendo las entidades aludidas adaptar los planes en un plazo de hasta TREINTA (30) días hábiles a partir de su inscripción y en la forma que determine la Autoridad de Aplicación conjuntamente con el mencionado organismo.

ARTICULO 8º.- La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD dictará la normativa a la que deberán adecuarse los modelos de contrato a suscribirse entre las entidades consignadas en el artículo 1º de la presente reglamentación y los usuarios, como así también las modificaciones que se incorporen a los contratos vigentes.

ARTICULO 9º.- Extinción contractual por rescisión o resolución:

1) RESCISION EFECTUADA POR LOS USUARIOS:

Los usuarios pueden rescindir en cualquier momento el contrato sin limitación y sin penalidad alguna. Sin perjuicio de ello y a efectos de evitar el ejercicio abusivo de este derecho, el mismo podrá ser ejercido solamente una vez por año. No podrá supeditarse el ejercicio de la facultad de rescisión contractual por el usuario a la previa cancelación de las sumas adeudadas a las entidades comprendidas en el artículo 1º de la presente reglamentación.

2) RESOLUCION EFECTUADA POR LAS ENTIDADES MENCIONADAS EN EL ARTICULO 1º DE ESTA REGLAMENTACION:

a) Por falta de pago de TRES (3) cuotas íntegras y consecutivas: En este caso, será obligación de la entidad notificar de inmediato la constitución en mora intimando al usuario a regularizar el pago íntegro de las sumas adeudadas en un plazo de DIEZ (10) días hábiles y, vencido este último, resolver el vínculo contractual, con la finalidad de impedir el devengamiento de nuevos períodos de facturación.

b) Por falsedad de la declaración jurada: Para que la entidad pueda resolver con justa causa el contrato celebrado, deberá acreditarse que el usuario no obró de buena fe en los términos del artículo 1198 del CODIGO CIVIL.

La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD dictará la normativa pertinente a fin de establecer las características que deberán contener las declaraciones juradas y el plazo por el cual se podrá invocar la falsedad.

ARTICULO 10.- Los períodos de acceso progresivo a la cobertura para los contratos celebrados entre los usuarios y los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente reglamentación, sólo podrán establecerse para el acceso a las prestaciones sanitarias superadoras o complementarias al Programa Médico Obligatorio (PMO) vigente.

Los contratos deberán estar previamente aprobados por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD. Los períodos de acceso progresivo en ningún caso podrán superar los DOCE (12) meses corridos desde el comienzo de la relación contractual.

Cuando por modificación de lo normado en el Programa Médico Obligatorio (PMO) vigente, la prestación médica carente complementaria o suplementaria ingresare a un nuevo Programa Médico Obligatorio aprobado y publicado por la autoridad sanitaria, dicha carencia quedará automáticamente anulada.

La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD establecerá y determinará las situaciones de preexistencia que podrán ser de carácter temporario, crónico o de alto costo que regirán para todos los tipos de contratos entre las partes comprendidas en el presente decreto sin excepción.

Las de carácter temporario son aquellas que tienen tratamiento predecible con alta médica en tiempo perentorio.

Las de carácter crónico son aquellas que con el nivel científico actual no se puede determinar una evolución clínica predecible ni tiempo perentorio de alta médica.

Las de alto costo y baja incidencia son aquellas en que el tratamiento pone en riesgo económico a las partes intervinientes.

La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD autorizará los valores diferenciales para las prestaciones de carácter temporario debidamente justificados y la duración del período de pago de la cuota diferencial, que no podrá ser mayor a TRES (3) años consecutivos, al cabo de los cuales la cuota será del valor normal del plan acordado.

Asimismo la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD autorizará los valores diferenciales para las patologías de carácter crónico y de alto costo.

La Autoridad de Aplicación establecerá los plazos de preexistencia para los casos de patologías de carácter temporario, crónico y alto costo. Vencidos los plazos estipulados por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, las entidades mencionadas en la presente reglamentación no podrán acogerse a la falsedad de la declaración jurada por parte de los usuarios.

ARTICULO 11.- Además de la edad, no podrán ser contemplados como supuestos de rechazo de admisión los establecidos en el artículo 1º de la Ley N°23.592.

ARTICULO 12.- Para los supuestos previstos en la primera parte del artículo 12 de la Ley, la Autoridad de Aplicación definirá una matriz de cálculo actuarial de ajuste por riesgo dentro de los NOVENTA (90) días de la entrada en vigencia de la presente reglamentación.

Para aquellos casos contemplados en la segunda parte de la norma, la antigüedad de DIEZ (10) años deberá ser en forma continua en la misma entidad comprendida en los alcances de esta reglamentación.

En caso de producirse el supuesto previsto en artículo 5º, inciso m) de la Ley N°26.682, los usuarios conservarán la antigüedad que tuvieron hasta el momento de declararse la quiebra de la entidad la que se adicionará a la nueva entidad que se le asigne, a los fines establecidos en este artículo.

ARTICULO 13.- En caso de muerte del titular, las entidades del artículo 1º de la Ley N°26.682 deberán garantizar a los integrantes del grupo familiar primario la cobertura del Programa Médico Obligatorio (PMO) durante un período de DOS (2) meses, contados desde su fallecimiento, sin obligación de efectuar pago alguno. Una vez vencido dicho plazo, el cónyuge supérstite, el descendiente de mayor edad o su representante legal, o cualquier otro miembro del grupo familiar a cargo, podrán optar por la continuidad, para lo cual cualquiera de los mencionados deberá constituirse como titular del plan.

ARTICULO 14.- Los sujetos mencionados en los incisos a) y b) del artículo 14 de la Ley N°26.682 ingresan al sistema en calidad de beneficiarios no titulares.

Las entidades comprendidas en el artículo 1º de la Ley quedan obligadas a admitir la afiliación de los beneficiarios contemplados en los incisos a) y b) junto con la del beneficiario titular, de conformidad con esta reglamentación.

Los hijos menores de VEINTIUN (21) años que desarrollan una actividad profesional, comercial o laboral y cesan en dicha actividad podrán incorporarse como integrantes del grupo familiar primario a cargo del titular. También podrán incorporarse como integrantes del grupo familiar primario a cargo del titular los hijos incapacitados con certificado de discapacidad vigente y a cargo del afiliado titular, mayores de VEINTIUN (21) años; los hijos del cónyuge o del conviviente; los menores cuya guarda y tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa o guarda judicial con fines de adopción, que reúnan los requisitos establecidos en el inciso a) del artículo 14 de la Ley N°26.682.

También podrán incorporarse como integrantes del grupo familiar primario a cargo del titular los hermanos incapacitados del afiliado titular, mayores de DIECIOCHO (18) años, cuya curatela haya sido acordada por autoridad judicial, que reúnan los requisitos establecidos en el inciso a) del artículo 14 de la Ley N°26.682.

La convivencia en unión de hecho deberá acreditarse conforme la documentación o información sumaria pertinente expedida por la autoridad competente, según la jurisdicción.

La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD podrá autorizar, con los requisitos que ella establezca, la inclusión como usuarios, de otros ascendientes o descendientes por consanguinidad del titular y que se encuentren a su cargo, en cuyo caso autorizará los valores diferenciales de las cuotas por la incorporación de dichas personas.

ARTICULO 15.- El derecho de antigüedad reconocido en este artículo abarca al grupo familiar inscripto y a los nuevos integrantes por nacimiento con Certificado o Constancia de Nacimiento expedida por el Registro Civil de la Jurisdicción, o DNI, o testimonio de la sentencia de adopción, una vez adheridos en el plan del usuario titular.

ARTICULO 16.- Los contratos vigentes de planes de prestaciones médicas a la fecha de publicación de la presente reglamentación, deberán ser ajustados a los modelos de contratación que autorice la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD en un plazo de SESENTA (60) días. En ningún caso, el cumplimiento de la presente disposición, podrá generar menoscabo en los derechos que pudieren haber adquirido los usuarios en

virtud de relaciones contractuales existentes al momento de entrada en vigencia de la Ley N°26.682.

ARTICULO 17.- La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD implementará la estructura de costos que deberán presentar las entidades, con los cálculos actuariales necesarios, la verificación fehaciente de incremento del costo de las prestaciones obligatorias, suplementarias y complementarias, las nuevas tecnologías y reglamentaciones legales que modifiquen o se introduzcan en el Programa Médico Obligatorio (PMO) en vigencia, el incremento de costos de recursos humanos y cualquier otra circunstancia que la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y las entidades comprendidas en la presente reglamentación, consideren que incide sobre los costos de la cuota de los planes ya autorizados.

La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD elevará, previo dictamen vinculante de la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, el pedido de autorización de incrementos de las cuotas de los planes aprobados al Ministro de Salud para su aprobación.

El pago de las cuotas será efectuado por los usuarios a través de red bancaria, en cuenta única y exclusiva habilitada únicamente para la recepción del pago de dichos conceptos. Cada entidad deberá denunciar ante la Autoridad de Aplicación, los datos de la entidad bancaria y de la cuenta recaudadora. Las respectivas entidades bancarias deberán debitar automáticamente los importes correspondientes a los artículos 24 y 25 de la Ley N°26.682, antes del giro a la cuenta individual de cada entidad. Tales débitos serán acreditados por las entidades bancarias en una cuenta especial a crearse por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA.

La diferenciación de la cuota por plan y por grupo etario sólo podrá darse al momento del ingreso del usuario al sistema. Una vez ingresado al sistema, la cuota sólo podrá modificarse por los aumentos expresamente autorizados, con excepción del régimen establecido para aquellos que alcancen los SESENTA Y CINCO (65) años de edad y que no cuenten con DIEZ (10) años de antigüedad continua en la misma entidad comprendida en los alcances de esta reglamentación.

La relación de precio entre la primer franja etaria y la última no puede presentar una variación de más de TRES (3) veces, siendo que la primera franja será la menos onerosa y la última la más onerosa.

ARTICULO 18.- Para la fijación de los aranceles mínimos obligatorios se tomará en consideración el NOMENCLADOR DE PRESTACIONES DE SALUD DEL HOSPITAL PUBLICO DE GESTION DESCENTRALIZADA.

ARTICULO 19.- La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD dictará las resoluciones pertinentes que fijen las pautas a las que deberán ajustarse los modelos de contrato a implementarse entre las entidades del artículo 1º y los prestadores.

ARTICULO 20.- Los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada tienen el derecho y obligación al cobro de prestaciones realizadas a los usuarios de las entidades enunciadas en la presente reglamentación. A sus efectos, deberán cumplir la normativa del HOSPITAL PUBLICO DE GESTION DESCENTRALIZADA vigente para el cobro de las prestaciones realizadas a los beneficiarios de las Leyes Nros. 23.660 y 23.661. En caso de no recibir el pago en tiempo y forma, los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada presentarán ante la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD la documentación pendiente de pago, a los fines que la Autoridad de Aplicación gestione el débito pertinente de la cuenta recaudadora de la entidad, de conformidad al procedimiento que a tal efecto se dicte.

La situación de urgencia es aquella resultante de accidentes personales o de complicaciones en el proceso gestacional.

La situación de emergencia es el riesgo inmediato de vida o de lesiones irreparables para el usuario si no recibe atención médica inmediata.

ARTICULO 21.- LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD dictará las resoluciones pertinentes a fin de establecer las características de las garantías y avales que deberán cumplimentar las Empresas de Medicina Prepaga.

ARTICULO 22.- Los Agentes del Seguro de Salud enunciados en el artículo 22 de la Ley deberán consignar en sus registros rubricados, en forma discriminada del resto de las operaciones, los movimientos patrimoniales y de ingresos y egresos vinculados a la comercialización de planes de adhesión voluntaria o planes superadores o complementarios por mayores servicios.

Asimismo en los informes económico-financieros requeridos en la reglamentación del artículo 5º, inciso i), deberán incluir un Estado de Situación (Estado Patrimonial y Estado de Recursos y Gastos) específico por las actividades mencionadas en el párrafo anterior.

ARTICULO 23.- Los Agentes del Seguro de Salud mencionados en el artículo 23 de la Ley son los incluidos en el inciso b) del artículo 1º de la presente reglamentación.

ARTICULO 24.- Se considerarán infracciones:

- a) La violación de las disposiciones de la Ley N°26.682 y de la presente reglamentación, las normas que establezca el MINISTERIO DE SALUD, y la Autoridad de Aplicación.
- b) Falta de pago de los aranceles dispuestos.
- c) Violaciones a las Leyes Nros. 24.240, 25.156 y 23.592 y sus respectivas modificatorias, según correspondiere.
- d) Falta de cobertura sanitaria científicamente determinada en tiempo y forma correspondiente al plan contratado.
- e) La violación por parte de los prestadores de las condiciones contenidas en las contrataciones de los servicios.
- f) La negativa de las entidades comprendidas en el artículo 2º de la Ley N°26.682 a proporcionar la documentación informativa y demás elementos de juicio que la Autoridad de Aplicación a través de sus funcionarios, auditores y/o síndicos requiera en el ejercicio de sus funciones, derechos y atribuciones.
- g) El incumplimiento de las directivas impartidas por las Autoridades de Aplicación.
- h) La no presentación en tiempo y forma de los programas, presupuestos, balances y memorias generales y copia de los contratos celebrados, cartillas y cualquier otro tipo de documentación solicitada por la Autoridad de Aplicación.
- i) La falta de pago al HOSPITAL PUBLICO DE GESTION DESCENTRALIZADA en tiempo y forma.

Las entidades comprendidas en la presente reglamentación estarán obligadas a brindar la prestación de urgencia aun cuando esté en trámite el procedimiento sumarial sancionatorio en sede administrativa.

ARTICULO 25.- Recursos:

EL MINISTERIO DE SALUD a través de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD dictará la normativa pertinente que establezca el monto que deberá abonar cada entidad en concepto de matrícula anual.

ARTICULO 26.- Derecho de los usuarios:

- a) El derecho a las prestaciones médicas comprende a las situaciones de urgencia y emergencia definidas en el artículo 20 de la presente reglamentación.
 - b) A los efectos del mantenimiento de una adecuada calidad de servicio todo tipo de modificación posterior a la aprobación de los respectivos planes por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, sea en estructura sanitaria, prestaciones y/o tecnología sanitaria de aplicación que fuera incluida en los planes de cobertura, deberá ser notificada a la Autoridad de Aplicación para su autorización, correspondiendo o no una modificación de cuota.
- Si por cualquier causa o razón se produce un cambio de prestador en la cartilla contratada por plan, el usuario tendrá derecho a seguir siendo asistido en el prestador de origen de su tratamiento hasta el alta médica de la patología existente en el momento de producirse el cambio, sin costo adicional alguno.

ARTICULO 27.- El CONSEJO PERMANENTE DE CONCERTACION será presidido por el Superintendente de Servicios de Salud.

El CONSEJO PERMANENTE DE CONCERTACION participará en la elaboración de las normas y procedimientos a que se ajustará la prestación de servicios y las modalidades y valores retributivos.

La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD dictará el reglamento de funcionamiento del citado Consejo, el que preverá la constitución de subcomisiones y la participación de la autoridad sanitaria correspondiente.

En los casos que el CONSEJO PERMANENTE DE CONCERTACION deba considerar aspectos relativos a distintas ramas profesionales y actividades de atención de la salud podrá integrar, con voz pero sin voto, al correspondiente representante para el tratamiento del tema.

El CONSEJO PERMANENTE DE CONCERTACION funcionará como paritaria periódica a los efectos de la actualización de los valores retributivos. Cuando no se obtengan

acuerdos el Superintendente de Servicios de Salud actuará como instancia de conciliación y, si subsistiera la diferencia, laudará el MINISTERIO DE SALUD.

ARTICULO 28.- Sin reglamentar.

ARTICULO 29.- Sin reglamentar.

ARTICULO 30.- Sin reglamentar.

1.1.NORMAS RELACIONADAS

- **Ley 25.865 y Decreto Reglamentario 806/04 (Creación del Monotributo Social).**
Objetivo: Crea el Registro Nacional de Efectores Sociales en el que se pueden inscribir aquellas personas que se encuentren, según la ley, en condiciones de vulnerabilidad social.

Ley 25.865

Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. Su modificación. Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) - Monotributo. Sustitúyese el Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementaria. Derógase el Régimen Especial de Seguridad Social para Pequeños Contribuyentes Eventuales establecido por el Decreto N° 1401/2001. Establécese un régimen especial de regularización de obligaciones provenientes del aporte previsional de los trabajadores autónomos, regulado por las Leyes Nros. 24.241, 18.038, 19.032 y 21.581 y del impuesto integrado y cotizaciones previsionales fijas con destino al Sistema Unico de la Seguridad Social, correspondiente a los responsables adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes instituidos por la Ley N° 24.977 y sus modificaciones.

Sancionada: Diciembre 17 de 2003.

Promulgada Parcialmente: Enero 15 de 2004.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

TITULO I

ARTICULO 1° — Modifícase la ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, como se indica a continuación:

a) Derógase, lo siguiente:

1. En su artículo 4°, su último párrafo.
2. En su artículo 19, su tercer párrafo.
3. En su artículo 28, segundo párrafo, la expresión "...o como responsable no inscripto...".
4. Su Título V, "Responsables no Inscriptos".
5. En su artículo 36, su último párrafo.
6. Sus artículos 38 y 40.
7. En su artículo 39, su segundo párrafo.

b) Incorpórase como inciso j) del artículo 28 el siguiente:

j) Las ventas, obras, locaciones y prestaciones de servicio efectuadas por las Cooperativas de Trabajo, promocionadas e inscriptas, en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, cuando el comprador, locatario o prestatario sea el Estado nacional, las provincias, las municipalidades o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus respectivas reparticiones y entes centralizados o descentralizados, excluidos las entidades y Organismos comprendidos en el artículo 1° de la ley 22.016.

c) Sustitúyese su artículo 41, por el siguiente:

Artículo 41: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 37 hará presumir, sin admitir prueba en contrario, la falta de pago del impuesto, por lo que el comprador, locatario o prestatario no tendrá derecho al crédito a que hace mención el artículo 12.

Lo dispuesto precedentemente no implica disminución alguna de las obligaciones de los demás responsables intervinientes en las respectivas operaciones.

ARTICULO 2° — Sustitúyese el Anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementaria, por el que se aprueba por la presente ley.

ARTICULO 3° — Derógase el Régimen Especial de Seguridad Social para Pequeños Contribuyentes Eventuales, establecido por el Decreto 1401 del 4 de noviembre de 2001.

TITULO II

ARTICULO 4° — Establécese, por el plazo de un (1) año, un régimen especial de regularización, respecto de las siguientes obligaciones:

a) Aporte previsional de los trabajadores autónomos, regulado —según corresponda— por las disposiciones de las leyes 24.241; 18.038; 19.032 y 21.581, sus respectivas modificaciones y normas complementarias y reglamentarias.

Se entenderá por trabajador autónomo, al sujeto —inscripto o no— considerado como tal por la ley 24.241 y sus modificaciones.

b) Impuesto integrado y las cotizaciones previsionales fijas con destino al Sistema Unico de la Seguridad Social (SUSS), correspondientes a los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo), instituido por la ley 24.977 y sus modificaciones.

ARTICULO 5° — Los sujetos indicados en el artículo precedente podrán incluir en el presente régimen las obligaciones no exteriorizadas, así como aquellas no abonadas —total o parcialmente —, vencidas hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y sus intereses calculados con las tasas vigentes correspondientes a cada período.

ARTICULO 6° — Los trabajadores autónomos podrán incluir asimismo sus obligaciones prescriptas, así como aquellas que resulten no exigibles, de acuerdo con lo establecido por la ley 24.476. En este último caso el capital se calculará de conformidad con lo dispuesto por la mencionada ley y su cancelación tendrá los efectos allí previstos. La deuda por aportes previsionales, no comprendida en la ley citada en el párrafo anterior, se determinará de acuerdo con la/s categoría/s mínima/s obligatoria/s en la que debió encuadrarse el trabajador autónomo o, en su caso, con la/s mayor/es por la que optó, correspondiente al momento de su devengamiento, calculada según su valor, a la fecha de vencimiento original de la obligación.

ARTICULO 7° — El régimen que se establece en el presente Título no será aplicable a:

a) Querellados o denunciados penalmente, con fundamento en las leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769, según corresponda, a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

b) Denunciados o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio hasta la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, o cuando dicho requerimiento guarde relación con delitos comunes que fueran objeto de causas penales en las que se haya ordenado el procesamiento de funcionarios o ex funcionarios estatales,

c) Las obligaciones que, como empleadores, les corresponda a los sujetos indicados en el artículo 4°, así como las emergentes de otros tributos.

d) Las deudas originadas en planes de facilidades de pago, cuya caducidad se produzca entre la fecha de entrada en vigencia de esta ley y aquella en la que el contribuyente y/o responsable efectúa su acogimiento al plan especial de regularización que se establece en el presente título.

ARTICULO 8° — Los contribuyentes y/o responsables que regularicen su situación dando cumplimiento a sus obligaciones omitidas —total o parcialmente— relativas a las obligaciones incluidas en el presente régimen, estarán exentos de sanciones administrativas, cualquiera sea su naturaleza e independientemente del estado procesal en que se encontrare su tramitación o sustanciación.

A tal fin, deberán ingresar la deuda correspondiente al capital omitido con más los intereses respectivos, en la forma, plazos y condiciones que se establecen en el presente régimen.

Dichos intereses se determinarán —por todo el período de mora— según la tasa dispuesta por el artículo 37 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus

modificaciones, vigente a la fecha de origen de cada una de las deudas, reducida en un cincuenta por ciento (50%).

En ningún supuesto el importe total de los intereses por cada una de las deudas incluidas en la presente regularización podrá superar el treinta por ciento (30%) del capital sujeto a la misma.

ARTICULO 9º — A los fines de lo establecido en el artículo precedente, se entenderá por cumplimiento de las obligaciones fiscales omitidas:

- a) La pertinente inscripción y el pago de los aportes adeudados, cuando se trate de la falta de inscripción como trabajadores autónomos.
- b) La recategorización, conforme a la normativa vigente y el pago de las diferencias resultantes, cuando se trate de sujetos inscriptos en una categoría inferior a la que correspondía, por parte tanto de monotributistas como de trabajadores autónomos.
- c) El pago de la deuda resultante con más sus intereses, cuando se trate de importes mensuales adeudados.

ARTICULO 10. — No se encuentran sujetas a reintegro o repetición, las sumas que con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se hayan ingresado en concepto de capital, intereses resarcitorios y punitivos y multas, por las obligaciones indicadas en el artículo 4º.

ARTICULO 11. — El pago de las obligaciones incluidas en el presente régimen será efectuado en la forma, plazos y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, el que deberá contemplar un plan de pagos de hasta sesenta (60) cuotas, con un interés anual de hasta el seis por ciento (6%).

Asimismo, el monto de cada cuota no podrá superar el treinta por ciento (30%) del pago mensual que tenga que realizar el monotributista.

Asimismo, deberá posibilitar al contribuyente optar por menores plazos de pago, reduciendo los intereses previstos en el artículo 8º y permitiendo, además, la opción al cumplimiento de la obligación en un solo pago, en cuyo supuesto preverá una quita de intereses adicional a lo estipulado en el referido artículo.

ARTICULO 12. — La Administración Federal de Ingresos Públicos, establecerá los mecanismos formales que estime necesarios respecto del régimen establecido por el presente Título, y en especial sobre requisitos, plazos y demás condiciones relativas a su aplicación.

TITULO III

ARTICULO 13. — El Poder Ejecutivo nacional podrá reducir la porción del aporte de los trabajadores autónomos indicada en el inciso c) del artículo 18 de la ley 24.241 y sus modificaciones, en una suma inferior o igual al importe del aporte mensual total de su categoría de revista, por cada ejercicio anual.

La mencionada reducción estará condicionada al cumplimiento, por parte de los trabajadores autónomos, de alguna o todas de las siguientes condiciones:

- a) el pago anticipado de los aportes,
- b) el estricto cumplimiento de la cancelación en término de los aportes en un determinado período, y
- c) la utilización de determinados medios de pago.

ARTICULO 14. — La reducción indicada en el artículo precedente podrá efectivizarse mediante la acreditación del importe resultante —con la frecuencia que estipule la Administración Federal de Ingresos Públicos— en la cuenta bancaria denunciada a esos fines por el contribuyente o en su defecto en la utilizada por el trabajador autónomo para abonar sus aportes previsionales.

ARTICULO 15. — El beneficio que se le otorgue, a los trabajadores autónomos, de conformidad con las disposiciones del presente Título, no alterará la calificación de aportante regular, como tampoco afectará la base de cálculo para determinar el haber de la prestación previsional que corresponda al contribuyente.

ARTICULO 16. — La Administración Federal de Ingresos Públicos, juntamente con el Banco de la Nación Argentina, podrá implementar instrumentos bancarios o de otro tipo que permitan facilitar —a los trabajadores autónomos y los monotributistas— el cumplimiento de sus obligaciones.

Las restantes entidades financieras, públicas y privadas, podrán adherir a dichas modalidades mediante los convenios que a tal fin suscriban, con la citada Administración Federal.

TITULO IV

ARTICULO 17. — Los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes están exentos del impuesto a la ganancia mínima presunta desde la fecha de entrada en vigencia de este último.

ARTICULO 18. — Las personas físicas que desarrollen exclusivamente actividades profesionales para las cuales se requiera título universitario, que hayan obtenido durante los años calendarios 1997 y siguientes ingresos brutos —gravados, exentos y no alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado— inferiores o iguales a la suma de treinta y seis mil pesos (\$ 36.000.-), que hubieren mantenido su condición de Responsables no Inscriptos, de conformidad con lo previsto por el entonces vigente Título V de la ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, amparadas o no en una medida cautelar judicial, se consideran incluidos en dicha categoría del impuesto hasta la fecha en que las disposiciones del Título I surtan efectos, conforme a lo indicado en el artículo 20.

ARTICULO 19. — El Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de jubilaciones y Pensiones creado por la ley 24.241 y sus modificatorias otorgará y financiará, conforme a sus propias normas legales y reglamentarias, a los sujetos inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, afiliados a su Régimen de Capitalización, las prestaciones de retiro por invalidez y pensión por fallecimiento del afiliado en actividad que correspondan, respectivamente, a solicitudes presentadas o fallecimientos ocurridos entre el 1° de Abril de 2000 y el último día del mes en que, en función de lo dispuesto por el artículo siguiente, resulte de aplicación, lo establecido en el inciso a) del artículo 40 del Anexo de la presente ley.

Los haberes retroactivos devengados, correspondientes a las prestaciones a otorgarse en cumplimiento del párrafo anterior quedarán excluidos de toda norma que establezca el pago en cuotas o en bonos de importes retroactivos previsionales.

Déjase establecido que las estipulaciones del decreto 1124 del 24 de noviembre de 2003, serán de aplicación complementaria y supletoria a lo dispuesto en el presente artículo.

ARTICULO 20. — Las disposiciones de esta ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. Las contenidas en el Título I surtirán efectos a partir de la fecha que disponga el Poder Ejecutivo nacional, la que no podrá superar los ciento ochenta (180) días contados desde la fecha de publicación oficial.

Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a disponer normas transitorias que permitan poner en vigencia gradualmente las reformas establecidas en el Título I de esta ley, dentro del plazo indicado en el párrafo anterior.

ARTICULO 21. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.865 —

EDUARDO O. CAMAÑO. — DANIEL O. SCIOLI. — Eduardo D. Rollano. — Juan Estrada.

NOTA: Los textos en negrita fueron observados.

ANEXO

REGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES (RS) - MONOTRIBUTO

TITULO I

Disposiciones preliminares.

ARTICULO 1° — Se establece un régimen tributario integrado y simplificado, relativo a los impuestos a las ganancias y al valor agregado y al sistema previsional, destinado a los pequeños contribuyentes.

TITULO II

Definición de Pequeño Contribuyente.

ARTICULO 2° — A los fines de lo dispuesto en este régimen, se consideran pequeños contribuyentes las personas físicas que realicen venta de cosas muebles, obras, locaciones y/o prestaciones de servicios, incluida la actividad primaria, las integrantes de cooperativas de trabajo, en los términos y condiciones que se indican en el Título VI y las

sucesiones indivisas en su carácter de continuadoras de las mismas. Asimismo, se consideran pequeños contribuyentes las sociedades de hecho y comerciales irregulares (Capítulo I, Sección IV, de la ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y sus modificaciones), en la medida que tengan un máximo de tres (3) socios.

En todos los casos siempre que cumplan las siguientes condiciones:

a) Que por locaciones y/o prestaciones de servicios hayan obtenido en el año calendario inmediato anterior al período fiscal de que se trata, ingresos brutos inferiores o iguales al importe de pesos setenta y dos mil (\$ 72.000).

b) Que por el resto de las actividades enunciadas, incluida la actividad primaria, hayan obtenido en el año calendario inmediato anterior al período fiscal de que se trata, ingresos brutos inferiores o iguales al importe de pesos ciento cuarenta y cuatro mil (\$ 144.000).

c) Que no superen en el mismo período los parámetros máximos referidos a las magnitudes físicas que se establezcan para su categorización a los efectos del pago integrado de impuestos que les corresponda realizar.

d) Que el precio máximo unitario de venta, sólo en los casos de venta de cosas muebles, no supere la suma de pesos ochocientos setenta (\$ 870).

e) Que no realicen, importaciones de cosas muebles y/o de servicios.

Cuando se trata de sociedades comprendidas, además de cumplirse con los requisitos exigidos a las personas físicas, la totalidad de los integrantes —individualmente considerados— deben reunir las condiciones para ingresar al Régimen Simplificado (RS).

ARTICULO 3° — Los sujetos que realicen alguna o algunas de las actividades mencionadas por el inciso a) del artículo anterior, simultáneamente con otra u otras comprendidas por el inciso b) de dicho artículo, deberán categorizarse de acuerdo con la actividad principal y sumar la totalidad de los ingresos brutos obtenidos.

A los fines de lo dispuesto en el párrafo precedente se entenderá por actividad principal aquella por la que el contribuyente obtenga mayores ingresos brutos.

Si la actividad principal del contribuyente queda encuadrada en el referido inciso a) quedará excluido del régimen si al sumarse los ingresos brutos obtenidos por actividades comprendidas por el citado inciso b), superare el límite de pesos setenta y dos mil (\$ 72.000).

En el supuesto que la actividad principal del contribuyente quede encuadrada en el inciso b) del artículo anterior quedará excluido del régimen si al sumarle los ingresos brutos obtenidos por actividades comprendidas por el inciso a) de dicho artículo, superare el límite de pesos ciento cuarenta y cuatro mil (\$ 144.000).

A los efectos de lo dispuesto por el presente régimen, se considera ingreso bruto obtenido en las actividades, al producido de las ventas, obras, locaciones o prestaciones correspondientes a operaciones realizadas por cuenta propia o ajena excluidas aquellas que se hubieran cancelado y neto de descuentos efectuados de acuerdo con las costumbres de plaza.

TITULO III

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).

ARTICULO 4° — Los sujetos que encuadren en la condición de pequeño contribuyente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° del presente régimen, podrán optar por inscribirse en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), debiendo tributar el impuesto integrado que se establece en el presente régimen.

ARTICULO 5° — Se considerará domicilio fiscal especial de los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado (RS), en los términos del Artículo 3° de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, el declarado en oportunidad de ejercer la opción, salvo que haya sido modificado en legal tiempo y forma por el contribuyente.

CAPITULO I

Impuestos comprendidos

ARTICULO 6° — Los ingresos que deban efectuarse como consecuencia de la inscripción en el Régimen Simplificado (RS), sustituyen el pago de los siguientes impuestos:

a) El impuesto a las ganancias.

b) El impuesto al valor agregado.

En el caso de las sociedades comprendidas en el presente régimen se sustituye el impuesto a las ganancias de sus integrantes originado por las actividades desarrolladas

por la entidad sujeta al Régimen Simplificado (RS) y el impuesto al valor agregado de la sociedad.

Las operaciones de los pequeños contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado (RS) se encuentran exentas del impuesto a las ganancias y del impuesto al valor agregado, así como de aquellos impuestos que lo sustituyan.

CAPITULO II

Impuesto Mensual a Ingresar – Categorías

ARTICULO 7° — Los pequeños contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado (RS) deberán —desde su adhesión al régimen— ingresar mensualmente el impuesto integrado, sustitutivo de los impuestos mencionados en el artículo precedente, que resultará de la categoría donde queden encuadrados en función al tipo de actividad, a los ingresos brutos y a las magnitudes físicas asignadas a las mismas.

El presente impuesto deberá ser ingresado hasta el mes en que el contribuyente renuncie al régimen —en los plazos, términos y condiciones que tal fin determine la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción— o, en su caso, hasta el cese definitivo de actividades.

Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos a regular la baja retroactiva del pequeño contribuyente, adherido al Régimen Simplificado (RS). En los casos de renuncia o baja retroactiva, no podrá exigirse al contribuyente requisitos que no guarden directa relación con los requeridos en el momento de tramitarse su alta.

ARTICULO 8° — Se establecen las siguientes categorías de contribuyentes —según el tipo de actividad desarrollada o el origen de sus ingresos— de acuerdo con los ingresos brutos anuales y las magnitudes físicas, que se indican a continuación:

a) Locaciones y/o prestaciones de servicios:

Categoría	Ingresos Brutos	Superficie Afectada	Energía Eléctrica Consumida Anualmente
A	Hasta \$ 12.000	Hasta 20 m2	Hasta 2.000 KW
B	Hasta \$ 24.000	Hasta 30 m2	Hasta 3.300 KW
C	Hasta \$ 36.000	Hasta 45 m2	Hasta 5.000 KW
D	Hasta \$ 48.000	Hasta 60 m2	Hasta 6.700 KW
E	Hasta \$ 72.000	Hasta 85 m2	Hasta 10.000 KW

b) Resto de las actividades:

Categoría	Ingresos Brutos	Superficie Afectada	Energía Eléctrica Consumida Anualmente
F	Hasta \$ 12.000	Hasta 20 m2	Hasta 2.000 KW
G	Hasta \$ 24.000	Hasta 30 m2	Hasta 3.300 KW
H	Hasta \$ 36.000	Hasta 45 m2	Hasta 5.000 KW
I	Hasta \$ 48.000	Hasta 60 m2	Hasta 6.700 KW
J	Hasta \$ 72.000	Hasta 85 m2	Hasta 10.000 KW
K	Hasta \$ 96.000	Hasta 110 m2	Hasta 13.000 KW
L	Hasta \$ 120.000	Hasta 150 m2	Hasta 16.500 KW
M	Hasta \$ 144.000	Hasta 200 m2	Hasta 20.000 KW

ARTICULO 9° — A la finalización de cada cuatrimestre calendario, el pequeño contribuyente deberá calcular los ingresos acumulados y la energía eléctrica consumida en los doce (12) meses inmediatos anteriores así como la superficie afectada a la actividad en ese momento. Cuando dichos parámetros superen o sean inferiores a los límites de su categoría quedará encuadrado en la categoría que le corresponda a partir del segundo mes inmediato siguiente del último mes del cuatrimestre respectivo.

Se considerará correctamente categorizado al responsable, cuando se encuadre en la categoría que corresponda al mayor valor de sus parámetros, ingresos brutos o magnitudes físicas, para lo cual deberá inscribirse en la categoría en la que no supere el valor de ninguno de los parámetros dispuestos para ella.

En el supuesto de que el pequeño contribuyente desarrolle sus tareas en su casa habitación u otros lugares con distinto destino se considerará exclusivamente como magnitud física a la superficie afectada y a la energía eléctrica consumida en dicha actividad. En caso de existir un único medidor se presume, salvo prueba en contrario, que se afectó el veinte por ciento (20%) a la actividad gravada, en la medida que se desarrollen actividades de bajo consumo energético. En cambio, se presume el noventa por ciento (90%), salvo prueba en contrario, en el supuesto de actividades de alto consumo energético.

La actividad primaria y la prestación de servicios sin local fijo, se categorizará exclusivamente por el nivel de ingresos brutos.

Las sociedades indicadas en el artículo 2º, según el tipo de actividad, sólo podrán categorizarse a partir de la Categoría D o J, en adelante.

ARTICULO 10. — A los fines dispuestos en el artículo 8º, se establece que:

a) El parámetro de superficie afectada a la actividad no se aplicará en zonas urbanas o suburbanas de las ciudades o poblaciones de hasta cuarenta mil (40.000) habitantes, con excepción de las actividades económicas que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción.

b) La facultad otorgada por el inciso anterior a la Administración Federal de Ingresos Públicos se aplicará también respecto de los parámetros precio máximo unitario de venta o energía eléctrica consumida.

El Poder Ejecutivo Nacional podrá incrementar, hasta en un cincuenta por ciento (50%), los parámetros para determinar las categorías, previstos en el artículo 8º, así como el precio máximo unitario de venta de cosas muebles, establecido en el inciso d) del artículo 2º.

Asimismo el Poder Ejecutivo Nacional podrá establecer parámetros máximos diferenciales para determinadas zonas, regiones y/o actividades económicas.

ARTICULO 11. — Cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos, en virtud de las facultades que le otorga la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, verifique que las operaciones de los contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado (RS) no se encuentran respaldadas por las respectivas facturas o documentos equivalentes correspondientes a las compras, obras, locaciones o prestaciones aplicadas a la actividad, o por la emisión de sus respectivas facturas o documentos equivalentes, se presumirá, salvo prueba en contrario, que los mismos tienen ingresos brutos anuales superiores a los declarados en oportunidad de su categorización, lo que dará lugar a:

a) Que el citado organismo los excluya de oficio a cuyo fin se deberá aplicar el procedimiento indicado en el inciso e) del artículo 27, no pudiendo reingresar al régimen hasta después de transcurridos tres (3) años calendarios posteriores al de la exclusión.

b) La exclusión del régimen establecido precedentemente se efectúe con independencia de las sanciones que pudieran corresponder por aplicación del artículo 40 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.

ARTICULO 12. — El impuesto integrado que por cada categoría deberá ingresarse mensualmente, es el siguiente:

a) Prestación de servicios o locaciones:

CATEGORIA	IMPUESTO A INGRESAR
A	\$ 33
B	\$ 39
C	\$ 75
D	\$ 128
E	\$ 210

b) Resto de las actividades:

CATEGORIA	IMPUESTO A INGRESAR
F	\$ 33
G	\$ 39
H	\$ 75
I	\$ 118
J	\$ 194

K	\$ 310
L	\$ 405
M	\$ 505

En el caso de las sociedades indicadas en el artículo 2º, el pago del impuesto integrado estará a cargo de la sociedad.

El monto a ingresar será el de la categoría que le corresponda —según el tipo de actividad, el monto de sus ingresos brutos y demás parámetros—, con más un incremento del veinte por ciento (20%) por cada uno de los socios integrantes de la sociedad.

Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a modificar, en más o en menos, en un diez por ciento (10%), los importes del impuesto integrado para cada una de las categorías previstas en el presente artículo.

Autorízase asimismo al Poder Ejecutivo nacional a bonificar —en una o más mensualidades— hasta un veinte por ciento (20%) del impuesto integrado total a ingresar en un ejercicio anual, a aquellos pequeños contribuyentes que cumplan con una determinada modalidad de pago o que guarden estricto cumplimiento con sus obligaciones formales y materiales.

El Pequeño Contribuyente que realice actividad primaria y quede encuadrado en la Categoría F, así como el pequeño contribuyente eventual, instituido en el Título IV, no deben ingresar el impuesto integrado y sólo abonarán las cotizaciones mensuales fijas con destino a la seguridad social.

Cuando el pequeño contribuyente inscripto en el Régimen Simplificado (RS) sea un sujeto inscripto en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social que quede encuadrado en las categorías A y F, no deberá ingresar el impuesto integrado durante el término de veinticuatro (24) meses contados a partir de su inscripción en el mencionado registro.

CAPITULO III

Inicio de actividades

ARTICULO 13. — En el caso de iniciación de actividades, el Pequeño Contribuyente que opte por inscribirse en el Régimen Simplificado (RS) deberá encuadrarse en la categoría que le corresponda de conformidad a la magnitud física referida a la superficie que tenga afectada a la actividad. De no contar con tales referencias se categorizará inicialmente mediante una estimación razonable.

Transcurridos cuatro (4) meses, deberá proceder a anualizar los ingresos brutos obtenidos y la energía eléctrica consumida en dicho período, a efectos de confirmar su categorización o determinar su recategorización o exclusión del régimen, de acuerdo con las cifras obtenidas, debiendo, en su caso, ingresar el importe mensual correspondiente a su nueva categoría a partir del segundo mes siguiente al del último mes del período indicado.

Hasta tanto transcurran doce (12) meses desde el inicio de la actividad, a los fines de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 9º, se deberá anualizar los ingresos brutos obtenidos y la energía eléctrica consumida en cada cuatrimestre.

ARTICULO 14. — Cuando la inscripción al Régimen Simplificado (RS) se produzca con posterioridad al inicio de actividades, pero antes de transcurridos doce (12) meses, el contribuyente deberá proceder a anualizar los ingresos brutos obtenidos y la energía eléctrica consumida en el período precedente al acto de inscripción, valores que juntamente con la superficie afectada a la actividad, determinarán la categoría en que resultará encuadrado.

Cuando hubieren transcurridos doce (12) meses o más desde el inicio de actividades se considerarán los ingresos brutos y la energía eléctrica consumida acumulada de los últimos doce (12) meses anteriores a la inscripción.

ARTICULO 15. — Cuando el Pequeño Contribuyente adherido al Régimen Simplificado (RS) realice una actividad económica comprendida en el artículo 8º, inciso a) y la sustituya por otra de las alcanzadas por el inciso b) del citado artículo o viceversa, respecto de su nueva actividad resultará de aplicación lo previsto en este Capítulo.

A tal fin, por la nueva actividad desarrollada, deberá presentar una declaración jurada categorizadora.

CAPITULO IV

Fecha y Forma de Pago

ARTICULO 16. — El pago del impuesto integrado y de las cotizaciones previsionales indicadas en los artículos 40 y 41 a cargo de los pequeños contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado (RS), será efectuado mensualmente en la forma, plazo y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos.

La obligación tributaria mensual no podrá ser objeto de fraccionamiento, salvo los casos en que se dispongan regímenes de retención o percepción.

Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos a establecer regímenes de percepción en la fuente así como regímenes especiales de pago que contemplen las actividades estacionales, tanto respecto del impuesto integrado como de las cotizaciones fijas con destino a la seguridad social.

CAPITULO V

Declaración Jurada - Categorizadora y Recategorizadora

ARTICULO 17. — Los pequeños contribuyentes que opten por el Régimen Simplificado (RS) deberán presentar al momento de ejercer la opción, en los supuestos previstos en el Capítulo III del presente régimen, o cuando se produzca alguna de las circunstancias que determinen su recategorización de acuerdo con lo previsto en el Artículo 9º del presente régimen, una declaración jurada determinativa de su condición frente al régimen, en la forma, plazo y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos.

CAPITULO VI

Opción al Régimen Simplificado (RS)

ARTICULO 18. — La opción al Régimen Simplificado (RS) se perfeccionará mediante la inscripción de los sujetos que reúnan las condiciones, establecidas en el artículo 2º del presente régimen, en las condiciones que fija la Administración Federal de Ingresos Públicos.

La opción ejercida de conformidad con el presente artículo sujetará a los contribuyentes al Régimen Simplificado (RS) desde el mes inmediato siguiente a aquel en que se efectivice hasta el mes en que se solicite su baja por cese de actividad o por renuncia al régimen.

En el caso de inicio de actividades los sujetos podrán adherir al régimen simplificado con efecto a partir del mes de adhesión, inclusive.

ARTICULO 19. — No podrán optar por el Régimen Simplificado (RS) los responsables que estén comprendidos en alguna de las causales contempladas en el artículo 21.

CAPITULO VII

Renuncia

ARTICULO 20. — Los contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado (RS) podrán renunciar al mismo en cualquier momento. Dicha renuncia producirá efectos a partir del primer día del mes siguiente y el contribuyente no podrá optar nuevamente por el presente régimen hasta después de transcurridos tres (3) años calendarios posteriores al de efectuada la renuncia, siempre que se produzca a efectos de obtener el carácter de responsable inscripto frente al impuesto al valor agregado por la misma actividad.

La renuncia implicará que los contribuyentes deban dar cumplimiento a sus obligaciones impositivas y de la seguridad social, por los respectivos regímenes generales.

CAPITULO VIII

Exclusiones

ARTICULO 21. — Quedan excluidos de pleno derecho del Régimen Simplificado (RS) los contribuyentes que:

- a) Sus ingresos brutos correspondientes a los últimos doce (12) meses superen los límites establecidos para la última categoría, de acuerdo con el tipo de actividad que realice y teniendo en cuenta lo previsto por el artículo 3º del presente régimen.
- b) Los parámetros físicos superen los correspondientes a la última categoría, de acuerdo con el tipo de actividad que realice.

c) El máximo precio unitario de venta, en el caso de contribuyentes que efectúen venta de cosas muebles, supere la suma establecida en el inciso d) del artículo 2° del presente anexo.

d) Adquieran bienes o realicen gastos injustificados por un valor incompatible con los ingresos declarados.

e) Hayan perdido su calidad de sujetos del presente régimen.

f) Realicen más de tres (3) actividades simultáneas o posean más de tres (3) unidades de explotación.

g) Realizando la actividad de prestación de servicios o locaciones se hubieran categorizado como si realizaran las restantes actividades.

Desde el momento en que se produzca cualquiera de las causales de exclusión, los contribuyentes deben dar cumplimiento a sus obligaciones impositivas y de la seguridad social, por los respectivos regímenes generales.

ARTICULO 22. — El acaecimiento de cualquiera de las causales indicadas en el artículo anterior producirá, sin necesidad de intervención alguna por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos la exclusión automática del presente régimen desde el momento en que tal hecho ocurra, por lo que los contribuyentes deberán dar cumplimiento a sus obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, según los regímenes generales respectivos, debiendo comunicar en forma inmediata dicha circunstancia al citado organismo.

ARTICULO 23. — La condición de pequeño contribuyente no es incompatible con el desempeño de actividades en relación de dependencia, como tampoco con la percepción de prestaciones en concepto de jubilación, pensión o retiro correspondiente a alguno de los regímenes nacionales o provinciales.

CAPITULO IX

Facturación y Registración

ARTICULO 24.— El contribuyente inscripto en el Régimen Simplificado (RS) deberá exigir, emitir y entregar las facturas por las operaciones que realice, estando obligado a conservarlas en la forma y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos.

ARTICULO 25. — Con respecto al impuesto al valor agregado, sus adquisiciones no generan, en ningún caso, crédito fiscal y sus ventas, locaciones o prestaciones no generan débito fiscal para sí mismos, ni crédito fiscal respecto de sus adquirentes, locatarios o prestatarios.

CAPITULO X

Exhibición de la Identificación y del Comprobante de Pago

ARTICULO 26. — Los contribuyentes incluidos en el Régimen Simplificado (RS) deberán exhibir en sus establecimientos, en lugar visible al público, los siguientes elementos:

a) Placa indicativa de su condición de pequeño contribuyente y de la categoría en la cual se encuentra inscripto en el Régimen Simplificado (RS).

b) Comprobante de pago perteneciente al último mes vencido del Régimen Simplificado (RS).

La exhibición de la placa indicativa y el comprobante de pago se considerarán inseparables a los efectos de dar cumplimiento a la obligación prevista en el presente artículo.

La falta de exhibición de cualquiera de ellos, traerá aparejada la consumación de la infracción contemplada en el apartado 2 del inciso a) del artículo 27, con las modalidades allí indicadas.

La constancia de pago a que se hace referencia en el presente artículo es la correspondiente a la categoría en la cual el pequeño contribuyente debe estar categorizado, por lo que la constancia de pago de otra categoría incumple el aludido deber de exhibición.

CAPITULO XI

Normas de Procedimiento Aplicables - Medidas Precautorias y Sanciones

ARTICULO 27. — Los pequeños contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado (RS) quedarán sujetos a las disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus

modificaciones, teniendo en cuenta las siguientes particularidades respecto de las normas de dicha ley, que en cada caso se detallan a continuación:

a. Serán sancionados con una multa de pesos cien (\$ 100) a pesos tres mil (\$ 3.000) y clausura de un (1) día a cinco (5) días, los pequeños contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado (RS) que incurran en los hechos u omisiones previstos en el artículo 40 de la citada ley, o en alguno de los indicados a continuación:

1) Sus operaciones no se encuentran respaldadas por las respectivas facturas o documentos equivalentes correspondientes a las compras, obras, locaciones o prestaciones aplicadas a la actividad.

2) No exhibiere en el lugar visible que determine la reglamentación los elementos indicados en el artículo anterior. Si la omisión de exhibición se refiriera a uno solo de los mencionados elementos, la sanción será de clausura o multa, de acuerdo con la evaluación que realice el juez administrativo interviniente.

b. Serán sancionados conforme a lo previsto en el artículo 45 de la citada ley, los pequeños contribuyentes inscriptos, en el Régimen Simplificado (RS) que mediante la falta de presentación de la declaración jurada de categorización o recategorización o por ser inexacta la presentada omitieran el pago del impuesto.

c. Serán sancionados con la multa prevista en el artículo 46 de la citada ley, los pequeños contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado (RS) que mediante declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas perjudicasen al Fisco en virtud de haber formulado declaraciones juradas categorizadoras o recategorizadoras que no se correspondan con la realidad.

d. No resultarán de aplicación, al presente régimen las disposiciones contempladas en el artículo 49, excepto la relativa al artículo 39 de la citada ley contenida en el último párrafo de dicha norma.

e. A fin de la exclusión de oficio de los contribuyentes adheridos al presente régimen, así como para la determinación de los impuestos adeudados a los respectivos regímenes, generales, será de aplicación el procedimiento previsto en los artículos 16 y siguientes de la citada ley. Asimismo, la resolución de determinación de oficio incluirá la declaración de exclusión al Régimen Simplificado (RS).

El impuesto integrado que hubiera abonado el contribuyente desde el acaecimiento de la causal de exclusión se tomará como pago a cuenta de los tributos adeudados por el régimen general.

f) Cuando no se trate de los supuestos previstos por el artículo 11, la Administración Federal de Ingresos Públicos recategorizará de oficio al pequeño contribuyente —siempre que no se hallare comprendido en la última categoría, en cuyo caso quedará automáticamente excluido del régimen— y determinará la deuda resultante, a cuyos fines será de aplicación el procedimiento sumario previsto en los artículos 70 y siguientes de la citada ley y correspondientes disposiciones reglamentarias.

g) Cuando la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, indica la fecha de vencimiento general para la presentación de declaraciones juradas, se deberá entender en el Régimen Simplificado (RS) que alude a la fecha en la cual acaeció alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 17 del presente régimen, en la cual debió categorizarse o recategorizarse el contribuyente, presentando la pertinente declaración jurada, como también al vencimiento del plazo fijado para el ingreso del impuesto mensual.

h) Contra las resoluciones que se dicten en virtud de las disposiciones del inciso f) precedente, las que impongan sanciones o las que se dicten en reclamos por repetición del impuesto de este régimen, será procedente la interposición de las vías impugnativas previstas en el artículo 76 de la citada ley.

ARTICULO 28. — El gravamen creado por el presente régimen se regirá por las disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, en la medida que no se opongan al mismo, y su aplicación, percepción y fiscalización estará a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

CAPITULO XII

Normas referidas al Impuesto al Valor Agregado

ARTICULO 29. — Los pequeños contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado (RS) quedarán sujetos a las siguientes disposiciones respecto a las normas de la ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, que en cada caso se detallan a continuación:

a) Los pequeños contribuyentes que habiendo renunciado o resultado excluidos del Régimen Simplificado (RS) adquieran la calidad de responsables inscriptos serán pasibles del tratamiento previsto en el artículo 16 por el impuesto que les hubiera sido facturado

como consecuencia de hechos imponibles anteriores a la fecha en que produzca efectos su cambio de condición frente al tributo.

b) Quedan exceptuadas del régimen establecido en el artículo 19 las operaciones registradas en los mercados de cereales a término en las que el enajenante sea un pequeño contribuyente inscripto en el Régimen Simplificado (RS).

c) Las operaciones de quienes vendan en nombre propio, bienes de terceros, a que se refiere el artículo 20, no generarán crédito fiscal para el comisionista o consignatario cuando el comitente sea un pequeño contribuyente inscripto en el Régimen Simplificado (RS).

CAPITULO XIII

Normas referidas al Impuesto a las Ganancias

ARTICULO 30. — Los adquirentes, locatarios o prestatarios de los sujetos comprendidos en el presente régimen sólo podrán computar en su liquidación del impuesto a las ganancias, las operaciones realizadas con un mismo sujeto proveedor hasta un total del diez por ciento (10%) y para el conjunto de los sujetos proveedores hasta un total del treinta por ciento (30%), en ambos casos sobre el total de las compras, locaciones o prestaciones correspondientes al mismo ejercicio fiscal. En ningún caso podrá imputarse a los períodos siguientes el remanente que pudiera resultar de dichas limitaciones.

El Poder Ejecutivo nacional podrá reducir los porcentajes indicados precedentemente hasta en, un dos por ciento (2%) y hasta en un ocho por ciento (8%), respectivamente, de manera diferencial para determinadas zonas, regiones y/o actividades económicas y en función de las categorías y actividades establecidas en el artículo 82 y concordantes del presente anexo.

La limitación indicada en el primer párrafo del presente artículo no se aplicará cuando el pequeño contribuyente opere como proveedor o prestador de servicio para un mismo sujeto en forma recurrente, de acuerdo con los parámetros que a tal fin determina la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Lo expuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando el sujeto proveedor se encuentre inscripto en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes Eventuales, previsto en el Título IV del presente Anexo.

CAPITULO XIV

Situaciones excepcionales

ARTICULO 31. — Cuando los contribuyentes sujetos al presente régimen se encuentren ubicados en determinadas zonas o regiones afectadas por catástrofes naturales que impliquen severos daños a la explotación, el impuesto a ingresar se reducirá en un cincuenta por ciento (50%) en caso de haberse declarado la emergencia agropecuaria, y en un setenta y cinco por ciento (75%) en caso de declaración de desastre, aplicándose para dichos contribuyentes las disposiciones del artículo 10 de la ley 22.913 y las de la ley 24.959.

Cuando en un mismo período anual se acumularan ingresos por ventas que corresponden a dos ciclos productivos anuales o se liquidaran stocks de producción por razones excepcionales, la Administración Federal de Ingresos Públicos, a solicitud del interesado, podrá considerar métodos de promediación de ingresos a los fines de una categorización o de recategorización que se ajuste a la real dimensión de la explotación.

TITULO IV

Régimen Simplificado Para Pequeños Contribuyentes Eventuales.

CAPITULO I

Ambito de Aplicación

ARTICULO 32. — El régimen simplificado e integrado previsto en la presente ley, será de aplicación con las salvedades indicadas en el presente Título, para los pequeños contribuyentes eventuales.

CAPITULO II

Concepto de Pequeño Contribuyente Eventual - Requisitos de Ingreso al Régimen

ARTICULO 33. — Se consideran pequeños contribuyentes eventuales a las personas físicas mayores de dieciocho (18) años, cuya actividad, por la característica, modo de prestación u oportunidad, se desarrolle en forma eventual u ocasional, que hayan obtenido en el año calendario inmediato anterior ingresos brutos inferiores o iguales a pesos doce mil (\$ 12.000) y que además cumplan con las siguientes condiciones en forma concurrente:

a) Que no perciban ingresos de ninguna naturaleza provenientes de la explotación de empresas, sociedades o cualquier otra actividad organizada como tal, incluso asociaciones civiles y/o fundaciones.

b) Que la actividad no se desarrolle en locales o establecimientos estables. Esta última limitación no será aplicable si la actividad es efectuada en la casa habitación del pequeño contribuyente eventual, siempre que no tenga o constituya un local.

c) Que no revistan el carácter de empleadores.

d) Que no realicen importaciones de cosas muebles y/o de servicios.

Serán considerados también pequeños contribuyentes eventuales, los sujetos dedicados a la explotación agropecuaria, que hayan obtenido en el año calendario inmediato anterior ingresos brutos inferiores o iguales a pesos doce mil (\$ 12.000), y que además cumplan con las condiciones establecidas en los incisos a) y d) precedentes.

CAPITULO III

Régimen de cotización - Pago

ARTICULO 34. — El régimen previsto en el presente Título para los pequeños contribuyentes eventuales consiste en un pago a cuenta de la cotización previsional prevista en el inciso a) del artículo 40 para el Régimen Simplificado (RS), que reemplazará la obligación mensual del pequeño contribuyente de ingresar el referido aporte.

Dicho pago a cuenta consistirá en el equivalente al cinco por ciento (5%) de los ingresos brutos que generen cada una de las operaciones que realicen, el que será detráído del precio de compra e ingresado por los adquirentes de las obras, locaciones o prestaciones que efectúen, o directamente por el pequeño contribuyente eventual, en los plazos y con las modalidades y condiciones que a tal fin disponga la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Cuando el pequeño contribuyente eventual sea un sujeto inscripto en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, estará exento de ingresar el pago a cuenta dispuesto en el párrafo precedente durante el término de veinticuatro (24) meses contados a partir de su inscripción en el mencionado registro.

Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos a disponer regímenes de percepción que complementen las modalidades de ingreso del pago a cuenta indicado en el presente artículo, así como a disponer modalidades particulares simplificadas de facturación de las operaciones que realicen los pequeños contribuyentes eventuales con consumidores finales.

El pequeño contribuyente eventual se encuentra exento de ingresar suma alguna por el impuesto integrado.

ARTICULO 35. — Los sujetos que opten por el presente régimen determinarán anualmente las cotizaciones previsionales que debieron ingresar al Régimen Simplificado (RS) y los compararán con los importes totales de los pagos a cuenta efectuados en igual período.

A tal efecto, calcularán la cantidad de meses cancelados, debiendo para ello atribuir los pagos a cuenta a los aportes sustitutivos correspondientes a cada uno de los meses, hasta el agotamiento de aquéllos.

ARTICULO 36. — Cuando la cantidad de meses cancelados conforme al procedimiento establecido en el artículo anterior, sea inferior a aquellos por los cuales debió tributar, el pequeño contribuyente eventual deberá abonar los aportes sustitutivos correspondientes a los meses faltantes o su fracción. En este caso, el ingreso deberá efectuarse hasta el día 20 de enero, inclusive, inmediato siguiente al de la finalización de cada año calendario y no devengará intereses hasta dicha fecha.

En caso de no abonarse la diferencia, los períodos sobre los que no se ingresen íntegramente los aportes no serán considerados, a ninguno de los efectos establecidos, en materia de prestaciones, por la ley 24.241 y sus modificatorias.

En el supuesto que la cantidad de meses cancelados conforme al procedimiento establecido en el artículo anterior, sea superior a aquellos por los cuales debió tributar, el pequeño contribuyente eventual gozará de un crédito a su favor, medido en cantidad de meses o fracción, computable en el ejercicio siguiente.

CAPITULO IV

Prestaciones

ARTICULO 37. — Las prestaciones correspondientes a los pequeños contribuyentes eventuales adheridos al Régimen Simplificado (RS), por los períodos en que hubieran efectuado las cotizaciones de conformidad con lo dispuesto en el presente Título, serán las previstas en los incisos a) y b) del artículo 43.

ARTICULO 38. — Los pequeños contribuyentes eventuales, no ingresarán la cotización prevista en los incisos b) y c) del artículo 40, y en consecuencia, no podrán acceder a las prestaciones del régimen de salud.

TITULO V

Régimen Especial de los Recursos de la Seguridad Social para Pequeños Contribuyentes

ARTICULO 39. — El empleador acogido al régimen de esta ley deberá ingresar, por sus trabajadores dependientes, los aportes, contribuciones y cuotas establecidos en los regímenes generales del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, del Régimen del Sistema Nacional del Seguro de Salud, de Asignaciones Familiares y Fondo Nacional de Empleo y de la ley sobre Riesgos del Trabajo, en los plazos y formas establecidos por las normas de fondo y de procedimiento que regulan cada uno de ellos.

ARTICULO 40. — El pequeño contribuyente inscripto en el Régimen Simplificado (RS) que desempeñe actividades comprendidas en el inciso b) del artículo 2° de la ley 24.241 y sus modificaciones, queda encuadrado desde su inscripción en el Régimen Previsional Público instituido por el Título II del Libro I de la ley 24.241 y sus modificaciones, sin perjuicio de la opción que se indica en el artículo siguiente y sustituye su aporte mensual previsto en el artículo 11 de la citada ley por las siguientes cotizaciones previsionales fijas:

a) Aporte de pesos treinta y cinco (\$ 35), con destino al Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

b) Aporte de pesos veintidós (\$ 22) con destino al Sistema Nacional del Seguro de Salud instituido por las leyes 23.660 y 23.661 y sus modificaciones, de los cuales un diez por ciento (10%) se destinará al Fondo Solidario de Redistribución establecido por el artículo 22 de la ley 23.661 y sus modificaciones. El aporte fijado no podrá ser inferior a la cotización mínima establecida por el artículo 24 del Anexo II del decreto 576/93, o el que lo reemplace en el futuro, con más el aporte al Fondo Solidario de Redistribución. **(Nota Infoleg: por art. 1° de la Resolución Conjunta N° 62/2008 y 50/2008 del Ministerio de Economía y Producción y del Ministerio de Salud, respectivamente B.O. 19/2/2008, se modifica el valor de la cotización establecida por el presente inciso, la que a partir del segundo mes siguiente al dictado de la Resolución Conjunta de referencia, será de pesos TREINTA Y SIETE (\$ 37,00), incluyendo el aporte al FONDO SOLIDARIO DE REDISTRIBUCION)**

c) Aporte adicional de pesos diecinueve (\$ 19), a elección del contribuyente, al Régimen Nacional de Obras Sociales instituido por la ley 23.660 y sus modificaciones, por la incorporación de cada integrante de su grupo familiar primario. Un diez por ciento (10%) de dicho aporte adicional se destinará al Fondo Solidario de Redistribución establecido por el artículo 22 de la ley 23.661 y sus modificaciones. El aporte fijado no podrá ser inferior a la cotización mínima establecida por el artículo 24 del Anexo II del decreto 576/93, o el que lo reemplace en el futuro, con más el aporte al Fondo Solidario de Redistribución. **(Nota Infoleg: por art. 1° de la Resolución Conjunta N° 62/2008 y 50/2008 del Ministerio de Economía y Producción y del Ministerio de Salud, respectivamente B.O. 19/2/2008, se modifica el valor de la cotización establecida por el presente inciso, la que a partir del segundo mes siguiente al dictado de la Resolución Conjunta de referencia, será de pesos TREINTA Y UNO (\$ 31,00), incluyendo el aporte al FONDO SOLIDARIO DE REDISTRIBUCION)**

Cuando el pequeño contribuyente inscripto en el Régimen Simplificado (RS) sea un sujeto inscripto en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, que quede encuadrado en las categorías A y F, estará

exento de ingresar el aporte mensual establecido en el inciso a) durante el término de veinticuatro (24) meses contados a partir de su inscripción en el mencionado registro. Asimismo, los aportes de los incisos b) y c) los ingresará con una disminución del cincuenta por ciento (50%) y por el mismo término.

Se eximirá de todos los aportes indicados en el presente artículo a:

1. Los menores de 18 años, en virtud de lo normado por el artículo 2º de la ley 24.241 y sus modificaciones.
 2. Los trabajadores autónomos a los que alude el primer párrafo del artículo 13 de la ley 24.476 y su reglamentación.
 3. Los profesionales universitarios que por esa actividad se encontraren obligatoriamente afiliados a uno o más regímenes provinciales para profesionales, de acuerdo con lo normado por el apartado 4, del inciso b) del artículo 3º de la ley 24.241 y sus modificaciones.
 4. Los sujetos que —simultáneamente con la actividad por la cual adhieran al Régimen Simplificado (RS)— se encuentren realizando una actividad en relación de dependencia y aporten en tal carácter al régimen nacional o a algún régimen provincial previsional.
- Los trabajadores autónomos a los que alude el segundo párrafo del artículo 13 de la ley 24.476 y su reglamentación, que se encuentren inscriptos al Régimen Simplificado (RS), sólo deberán ingresar —en su condición de trabajadores autónomos — la cotización prevista en el primer párrafo de este artículo, cuyo destino será el régimen previsional público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Dicha cotización no traerá para el trabajador derecho a reajuste alguno en sus prestaciones previsionales.

ARTICULO 41. — El pequeño contribuyente inscripto en el Régimen Simplificado (RS), podrá optar por incorporarse al Régimen de Capitalización instituido por el Título III del Libro I de la ley 24.241 y sus modificaciones. En ese caso, desde el mes en el cual ejerza dicha opción, deberá adicionar a las cotizaciones indicadas en el artículo precedente, obligatoriamente, un aporte mensual de pesos treinta y tres (\$ 33).

También podrá optar por permanecer en el régimen de reparto con la totalidad de los beneficios públicos, incluida la Prestación Adicional por Permanencia (PAP) de la ley 24.241 aportando la suma de pesos treinta y tres (\$ 33).

ARTICULO 42. — Los socios de las sociedades indicadas en el artículo 2º que adhieran al Régimen Simplificado (RS) deberán ingresar individualmente las cotizaciones indicadas en los dos artículos precedentes.

ARTICULO 43. — Las prestaciones del **Sistema Unico** de la Seguridad Social correspondientes a los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado (RS), por los períodos en que hubieran efectuado las cotizaciones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40, serán las siguientes:

- a) La Prestación Básica Universal, prevista en el artículo 17 de la ley 24.241 y sus modificaciones.
- b) El retiro por invalidez o pensión por fallecimiento, previstos en el artículo 17 de la ley 24.241 y sus modificaciones, el que se calculará sobre la base de aplicar los porcentajes previstos en los incisos a) o b), según corresponda, del artículo 97 de la ley 24.241 y sus modificaciones, sobre el importe de la Prestación Básica Universal, prevista en el artículo 17 de la ley 24.241 y sus modificaciones. Esta prestación estará a cargo del Régimen Previsional Público, salvo que el pequeño contribuyente ejerza la opción indicada en el artículo 41, en cuyo caso estará a cargo del Régimen de Capitalización.
- c) La prestación que corresponda del Régimen de Capitalización o las relativas al Régimen Público de Reparto, en caso de que el pequeño contribuyente ejerza la opción indicada en el artículo 41.
- d) Las prestaciones previstas en el Sistema Nacional del Seguro de Salud, instituido por las leyes 23.660 y 23.661 y sus modificaciones, para el Pequeño Contribuyente y en el caso de que éste ejerza la opción del inciso c) del artículo 40, para su grupo familiar primario. El pequeño contribuyente podrá elegir la obra social que le efectuará las prestaciones, desde su inscripción en el Régimen Simplificado (RS), **en los términos y condiciones establecidos en el Decreto 9 del 7 de enero de 1993 y su modificatorio y el Decreto 504 de fecha 12 de mayo de 1998 y su modificatorio.** El Poder Ejecutivo nacional dispondrá como requisito para el goce de las prestaciones previstas en este inciso que el pequeño contribuyente haya ingresado un número determinado de meses de los aportes indicados en el inciso b) y en su caso el c) del artículo 40, durante un período anterior a la fecha en que corresponda otorgar la cobertura.
- e) Cobertura Médico Asistencial por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en los términos de la ley 19.032 y sus modificaciones, al adquirir la condición de jubilado o pensionado.

Para acceder a las prestaciones establecidas en el inciso d), el contribuyente deberá estar al día con los aportes al presente régimen simplificado. El agente de Seguro de Salud podrá disponer la desafiliación del monotributista ante la falta de pago de tres (3) aportes mensuales consecutivos y/o de cinco (5) alternados.

ARTICULO 44. — La inscripción en el Régimen Simplificado (RS), excluye los beneficios previsionales emergentes de los regímenes diferenciales por el ejercicio de actividades penosas o riesgosas, respecto de los contribuyentes en su condición de trabajadores autónomos.

ARTICULO 45. — El Poder Ejecutivo Nacional podrá modificar los montos indicados en el presente Título, cuando las circunstancias lo hicieren aconsejable, en hasta un veinte por ciento (20%).

ARTICULO 46. — Para las situaciones no previstas en el presente Título, serán de aplicación supletoria las disposiciones de las leyes 19.032, 23.660, 23.661, 24.241 y 24.714, sus respectivas modificaciones y complementarias, así como los decretos y resoluciones que la reglamenten, siempre que no se opongan ni sean incompatibles a las disposiciones de la presente ley.

ARTICULO 47. — Ante la incorporación de beneficiarios por aplicación de la presente ley el Estado nacional deberá garantizar y aportar los fondos necesarios para mantener el nivel de financiamiento del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en los términos de la ley 24.241 y sus modificaciones, y sus adecuadas prestaciones.

TITULO VI

Asociados a Cooperativas de Trabajo

ARTICULO 48. — Los asociados de las cooperativas de trabajo podrán incorporarse al Régimen Simplificado (RS).

Los sujetos cuyos ingresos brutos anuales no superen la suma de pesos doce mil (\$ 12.000) sólo estarán obligados a ingresar las cotizaciones previsionales previstas en el artículo 40 y, en su caso, la del artículo 41, encontrándose exentos de ingresar suma alguna por el impuesto integrado.

Aquellos asociados cuyos ingresos brutos anuales superen la suma indicada en el párrafo anterior deberán abonar —además de las cotizaciones previsionales— el impuesto integrado que corresponda, de acuerdo con la categoría en que deban encuadrarse, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8º —según el tipo de actividad que realicen—, teniendo solamente en cuenta los ingresos brutos anuales obtenidos.

Los sujetos asociados a Cooperativas de Trabajo inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social cuyos ingresos brutos anuales no superen la suma de pesos doce mil (\$ 12.000) estarán exentos de ingresar el impuesto integrado y el aporte previsional mensual establecido en inciso a) del artículo 40 durante el término de veinticuatro (24) meses contados a partir de su inscripción en el mencionado registro. Asimismo, los aportes de los incisos b) y c) del referido artículo los ingresará con una disminución del cincuenta por ciento (50%) y por el mismo término. Transcurrido dicho plazo se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del presente artículo.

ARTICULO 49. — Los asociados a cooperativas de trabajo, cuyas modalidades de prestación de servicios y de ingresos encuadren en las especificaciones previstas en el Título IV, podrán inscribirse en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes Eventuales.

Los sujetos a que se refiere el cuarto párrafo del artículo anterior estarán exentos de ingresar el pago a cuenta dispuesto en el artículo 34 durante el término de veinticuatro (24) meses contados a partir de su inscripción en el mencionado registro.

ARTICULO 50. — En todos los casos, la cooperativa de trabajo será agente de retención de los aportes y, en su caso, del impuesto integrado, que en función de lo dispuesto por este Título sus asociados deban ingresar al Régimen Simplificado (RS).

La retención se practicará en cada oportunidad que la cooperativa liquide pagos a sus asociados en concepto de adelanto del resultado anual. A tal efecto, el formulario de recibo que entregue la cooperativa deberá tener preestablecido el rubro correspondiente a la retención que por el presente artículo se establece.

ARTICULO 51. — Las cooperativas de trabajo que inicien su actividad, en la oportunidad de solicitar su inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos deberán

solicitar también la inscripción en el Régimen Simplificado (RS) de sus asociados o, en su caso, en el Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes Eventuales, en los términos, plazos y condiciones que a tal fin disponga dicha Administración Federal de Ingresos Públicos.

ARTICULO 52. — Los asociados a las cooperativas de trabajo que se encuentren en actividad a la fecha de promulgación de la presente ley, podrán optar por su inscripción en el Régimen Simplificado (RS) o, en su caso, por el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes Eventuales. En estos supuestos, la cooperativa de trabajo deberá adecuar su proceder a lo dispuesto en el presente Título.

TITULO VII

Otras Disposiciones

ARTICULO 53. — Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos a dictar las normas complementarias necesarias para implementar las disposiciones del Régimen Simplificado (RS), en especial lo atinente a la registración de los pequeños contribuyentes, sus altas, bajas y modificaciones.

ARTICULO 54. — La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá verificar por intermedio de jubilados, pensionados y estudiantes, sin relación de dependencia, el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes inscriptos en el presente Régimen Simplificado (RS).

ARTICULO 55. — Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos a suscribir convenios con las provincias, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Municipios de toda la República Argentina, previa autorización de la Provincia a la cual pertenece, a los fines de la aplicación, percepción y fiscalización del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, en cuyo caso podrá establecer una compensación por la gestión que realicen la que se abonará por detracción de las sumas recaudadas.

ARTICULO 56. — Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos a celebrar convenios con los gobiernos de los Estados Provinciales, Municipales y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de ejercer la facultad de percepción y, en su caso, de aplicación, interpretación y/o de fiscalización respecto de los tributos de las indicadas jurisdicciones, correspondientes únicamente a los pequeños contribuyentes que se encuentren encuadrados hasta la categoría del Régimen Simplificado (RS) que se acuerde.

Los convenios celebrados entrarán en vigencia en la fecha que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos como inicio del período anual de pago para el Régimen Simplificado (RS), del año inmediato siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. Su denuncia, por cualquiera de las partes, producirá efectos en el año inmediato siguiente a tal hecho, a partir de la fecha precedentemente indicada.

Los gastos que demande el cumplimiento de las funciones acordadas serán soportados por los Estados Provinciales, Municipales y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el porcentaje de la recaudación que al respecto se establezca en el convenio.

ARTICULO 57. — La recaudación del impuesto integrado, a que se refiere el artículo 12, se destinará:

a) El setenta por ciento (70%) al financiamiento de las prestaciones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social, organismo dependiente de la Secretaría de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

b) El treinta por ciento (30%) a las jurisdicciones provinciales en forma diaria y automática, de acuerdo a la distribución secundaria prevista en la ley 23.548 y sus modificatorias, incluyendo a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur de acuerdo con la norma correspondiente.

Esta distribución no sentará precedente a los fines de la Coparticipación Federal de Impuestos.

- **Ley 26.160 (comunidades indígenas).**

Objetivo: Declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país.

▪ **Ley 26.355 MARCAS COLECTIVAS**

Marca Colectiva. Definición. Requisitos para la solicitud. Autoridad de aplicación. Reglamento de uso.

Sancionada: Febrero 28 de 2008

Promulgada de Hecho: Marzo 25 de 2008

Objetivo: Define las marcas colectivas como aquellas que distinguen los productos y/o servicios elaborados o prestados por las formas asociativas destinadas al desarrollo de la economía social. Menciona quienes pueden ser titulares y el procedimiento para su registro.

El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º — MARCA COLECTIVA es todo signo que distingue los productos y/o servicios elaborados o prestados por las formas asociativas destinadas al desarrollo de la economía social.

ARTICULO 2º — Sólo podrá solicitar y ser titular de la misma un solo agrupamiento constituido por productores y/o prestadores de servicios inscriptos en el REGISTRO NACIONAL DE EFECTORES DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMIA SOCIAL creado por el Decreto del Poder Ejecutivo nacional Nº 189/2004.

ARTICULO 3º — A los efectos registrales se aplicará a la MARCA COLECTIVA lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 22.362 de Marcas y Designaciones.

ARTICULO 4º — Será autoridad de aplicación el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, organismo autárquico creado por Ley Nº 24.481, modificada por Ley Nº 24.572.

ARTICULO 5º — Juntamente con la solicitud de registro o de transferencia se deberá acompañar el acta de constitución del agrupamiento, el certificado de efector de economía social y el reglamento de uso.

ARTICULO 6º — El reglamento de uso deberá ser aprobado por el REGISTRO NACIONAL DE EFECTORES DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMIA SOCIAL y contendrá:

- a) La denominación o identificación del agrupamiento solicitante;
- b) Domicilio real;
- c) Objeto del agrupamiento de productores o prestadores de servicios;
- d) Organo de administración que, conforme su propia normativa, esté facultado para representar a la entidad;
- e) Condiciones de afiliación, las que incluirán como requisito esencial estar inscripto en el REGISTRO NACIONAL DE EFECTORES DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMIA SOCIAL;
- f) Requisitos que deben cumplir las personas afiliadas para obtener la autorización de uso de la marca colectiva;
- g) Cualidades comunes que deben presentar los productos y/o servicios referidas al origen empresarial, la calidad, el modo de producción o fabricación u otras características;
- h) Reglas y demás condiciones a que debe sujetarse el uso de la marca colectiva por las personas autorizadas a su uso;
- i) Mecanismos de supervisión y verificación para el control del uso de la marca colectiva, conforme a las reglas y condiciones referidas precedentemente;
- j) Infracciones y correspondientes sanciones por el uso de la marca en forma distinta de lo regulado en el reglamento, incluyendo la suspensión, cancelación temporal o definitiva de la autorización de uso;
- k) Procedimientos para la aplicación de las sanciones;
- l) Motivos por los que se puede prohibir el uso de la marca a un miembro de la asociación;
- ll) Y otros que establezca el REGISTRO NACIONAL DE EFECTORES DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMIA SOCIAL.

ARTICULO 7º — Toda modificación del reglamento de uso de la marca colectiva adquirirá validez y eficacia desde su aprobación por el REGISTRO NACIONAL DE EFECTORES DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMIA SOCIAL.

ARTICULO 8º — La solicitud de una marca colectiva incluye la petición de registro en todas las clases del nomenclador internacional que utiliza la autoridad de aplicación. Esta

podrá proceder a la concesión de la solicitud en relación a un número determinado de las clases cuando resulte procedente, y podrá ampliar dicha concesión respecto a otra u otras en cuanto se hayan removido los impedimentos legales que pudieron existir.

ARTICULO 9º — La oposición a la solicitud de registro de una marca colectiva deberá deducirse en forma individual y en relación a cada una de las clases comprendidas en la misma. La Autoridad de Aplicación resolverá las oposiciones que se deduzcan contra las MARCAS COLECTIVAS, el plazo será de SEIS (6) meses contados a partir de la notificación de su interposición al solicitante. La resolución que dicte la Autoridad de Aplicación será recurrible judicialmente dentro del plazo de TREINTA (30) días hábiles de notificada, ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 10. — La oposición que se deduzca en cada clase de la MARCA COLECTIVA solicitada, abonará el duplo del arancel fijado por ese concepto para la marca singular.

ARTICULO 11. — Sin perjuicio de lo previsto en la Ley Nº 22.362 el Decreto Reglamentario de la Ley de Marcas y Designaciones Nº 558/81 modificado por Decreto Nº 1141/2003 respecto de la solicitud del registro son causales específicas de nulidad la falta de cumplimiento a lo requerido por el artículo 3º de la presente; y de denegatoria que el reglamento de uso resulte contrario a la ley, al orden público a la moral y buenas costumbres o pueda inducir a error sobre el carácter colectivo de la marca que se trate.

ARTICULO 12. — Cuando se solicite la renovación de la MARCA COLECTIVA se presentará una declaración jurada en la que se consignará si la misma ha sido utilizada en los últimos CINCO (5) años por lo menos en una de las clases registradas y se indicará, según corresponda, el producto o servicio.

ARTICULO 13. — La extinción del derecho de propiedad de una MARCA COLECTIVA se producirá por las causales y en las condiciones previstas en los artículos 23, 24, 25 y 26 de la Ley Nº 22.362, como asimismo en caso de baja fundada del Registro a que refiere el artículo 2º de la presente.

ARTICULO 14. — Quedan exentos del pago de aranceles los beneficiarios de la presente ley.

ARTICULO 15. — El MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL brindará asistencia gratuita y especializada a los efectores de la Economía Social en todos aquellos trámites de registro de MARCAS COLECTIVAS y elaboración de uso.

ARTICULO 16. — El MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL en forma articulada con el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (INTA) promoverá y facilitará el acceso a programas de calidad, capacitación y asistencia técnica que aseguren, no sólo la calidad de los procesos y productos sino también las mejoras de las condiciones sociolaborales de producción y para ello celebrarán los acuerdos que fueren menester.

ARTICULO 17. — Será de aplicación el Decreto Reglamentario de la Ley de Marcas y Designaciones Nº 558/81, modificado por el Decreto Nº 1141/03, en cuanto sea compatible con todo lo normado por la presente ley.

ARTICULO 18. — No serán de aplicación para las marcas colectivas, los artículos 7º, 9º, 10 primera parte, 17, 18, 19 y 20 párrafo 1º de la Ley de Marcas y Designaciones Nº 22.362, en tanto resultan incompatibles con la presente ley.

ARTICULO 19. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL OCHO.

— REGISTRADO BAJO EL Nº 26.355 —

EDUARDO A. FELLNER. — JULIO CESAR C. COBOS. — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada.

• **Resolución conjunta 4263/10, 9/10 y 2880/10.**

Objetivo: Habilita la categoría de Monotributo Social para la Agricultura Familiar accediendo a obra social y aportes jubilatorios a costo cero para agricultores.

Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional, Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar y Administración Federal de Ingresos Públicos

PRODUCCION AGROPECUARIA

Resolución Conjunta 4263/2010, 9/2010 y 2880

Régimen del Monotributo Social. Apruébanse las pautas de procedimientos para la implementación del pago a cada productor rural familiar.

Bs. As., 19/7/2010

VISTO el Expediente N° E-37111-2009 del Registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, el Convenio de Cooperación de fecha 12 de febrero de 2009 suscripto entre dicho ministerio y el ex MINISTERIO DE PRODUCCION, la Resolución Conjunta N° 249 y N° 853 de fecha 18 de julio de 2006 de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y de la SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO, respectivamente, y

CONSIDERANDO:

Que por medio del Convenio citado en el Visto, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y el ex MINISTERIO DE PRODUCCION se propusieron incorporar en la economía formal, a través de su inclusión en el REGIMEN DEL MONOTRIBUTO SOCIAL, a los productores rurales familiares que cumplan con el perfil establecido para los programas de desarrollo rural de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS, del ex MINISTERIO DE PRODUCCION y cuenten con las condiciones de vulnerabilidad social que se estipulan en la normativa que crea el REGISTRO NACIONAL DE EFECTORES DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMIA SOCIAL.

Que en el marco de dicho Convenio, el ex MINISTERIO DE PRODUCCION se comprometió a realizar por cuenta y orden de cada Monotributista Social, el pago mensual del CINCUENTA POR CIENTO (50%) correspondiente a los aportes con destino al Sistema Nacional del Seguro de Salud, instituido por las Leyes N° 23.660 y N° 23.661 y sus respectivas modificaciones y que le corresponde por él y los adherentes de su grupo familiar primario.

Que a su vez, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, mediante Resolución Conjunta N° 249 y N° 853 de fecha 18 de julio de 2006 de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y de la SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO, respectivamente, se obligó a transferir el otro CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los referidos aportes.

Que, a efectos de establecer los plazos, condiciones, requisitos y procedimientos para la efectivización del pago de los mencionados aportes, y en virtud del dictado del Decreto N° 1366 de fecha 1 de octubre de 2009 y sus normas complementarias, la SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, la SECRETARIA DE COORDINACION Y MONITOREO INSTITUCIONAL, del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, propician la presente medida.

Que a ese mismo efecto, han tomado previa intervención la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR de la SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR, la SUBSECRETARIA DE COMERCIALIZACION DE LA ECONOMIA SOCIAL de la SECRETARIA DE COORDINACION Y MONITOREO INSTITUCIONAL, a cuyo cargo se encuentra el REGISTRO NACIONAL DE EFECTORES DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMIA SOCIAL; y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Recaudación, de Coordinación Operativa de los Recursos de la Seguridad Social, de Técnico Legal de los Recursos de la Seguridad Social y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, todas dependientes de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.

Que asimismo, han tomado su competente intervención los servicios jurídicos permanentes de los MINISTERIOS DE DESARROLLO SOCIAL y DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA.

Que la presente medida se dicta en uso de las respectivas facultades conferidas por el Artículo 53 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificatorias y complementarias, texto sustituido por la Ley N° 26.565, el Artículo 59 del Decreto N° 1 de fecha 4 de enero de 2010, el Artículo 7° del Decreto N° 618 de fecha 10 de julio de 1997, sus modificatorios y complementarios y por el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002, modificado por

sus similares N° 2194 de fecha 22 de diciembre de 2008 y N° 1366 de fecha 1 de octubre de 2009.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COORDINACION Y MONITOREO INSTITUCIONAL, LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR Y EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS RESUELVEN:

Artículo 1º — Apruébanse las pautas procedimentales contenidas en el Anexo que forma parte integrante de la presente resolución, para la implementación del pago por parte del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, por cuenta y orden de cada productor rural familiar que cumpla con el perfil establecido para los programas de desarrollo rural adherido al Monotributo Social inscripto en el REGISTRO NACIONAL DE EFECTORES DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMIA SOCIAL, del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del aporte con destino al SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD —instituido por las Leyes N° 23.660 y N° 23.661 y sus respectivas modificaciones—, que debe ingresar por él y por los adherentes de su grupo familiar primario.

Art. 2º — El MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL tomará a su cargo el financiamiento del subsidio necesario para completar el CINCUENTA POR CIENTO (50%) restante del aporte dedichos sujetos, hasta alcanzar la cotización mínima prevista por el Artículo 39 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificatorias y complementarias, texto sustituido por la Ley N° 26.565 con destino al SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD, instituido por las Leyes N° 23.660 y N° 23.661 y sus respectivas modificaciones, conforme a lo establecido por la Resolución Conjunta N° 249 y N° 853 de fecha 18 de julio de 2006 de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y de la SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO, respectivamente.

Art. 3º — La presente resolución conjunta entrará en vigencia a partir de día de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Carlos D. Castagneto. — Carla Campos Bilbao. — Ricardo Echegaray.

ANEXO - PAUTAS PROCEDIMENTALES

1.- El REGISTRO NACIONAL DE EFECTORES DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMIA SOCIAL (en adelante el Registro) receptará las inscripciones provenientes del sector de la pequeña agricultura familiar, a través de los equipos técnicos de la SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, que a través de la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR asumirá la responsabilidad de dichas inscripciones.

Todas las inscripciones se verificarán de acuerdo con las pautas establecidas por las organizaciones del sector, las Municipalidades y el propio Registro, teniendo en cuenta las pautas establecidas por las Cláusulas 2º y 3º del Convenio de Cooperación de fecha 12 de febrero de 2009, suscripto entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y el ex MINISTERIO DE PRODUCCION.

2.- Asimismo, serán agregadas mes a mes las nuevas altas y bajas, ya sea por acreditaciones de hijos o nuevas inscripciones, así como las novedades y las inscripciones del sector de la agricultura familiar, según Resolución Conjunta N° 209 y N° 990 de fecha 16 de febrero de 2009 de la SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO y de la SECRETARIA DE COORDINACION Y MONITOREO INSTITUCIONAL.

3.- El Registro gestionará por ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS la asignación de la Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT) de los sujetos que se inscriban, para lo cual enviará a ese organismo la nómina, conteniendo los potenciales monotributistas sociales del sector agropecuario. Lo señalado, así como los demás trámites que resulten necesarios para sustanciar la inscripción en el Registro, serán encuadrados en los términos de la Resolución Conjunta N° 365 y N° 2564 de fecha 23 de febrero de 2009 del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, respectivamente.

4.- La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS informará al Registro las Claves Unicas de Identificación Tributaria (CUIT) asignadas e indicará quiénes no

cumplen las condiciones para obtener dicha clave y adherir al Monotributo Social, en cuyo caso el Registro procederá a la notificación de la novedad a la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR de la referida SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR.

Por otra parte la nómina que cumpla los requisitos para adherir al Monotributo Social, será enviada por el Registro a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, previa inscripción en el mismo, solicitando la asignación de la Clave Unica de Revista (CUR).

La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, registrará el alta como Monotributista Social del sector agropecuario y habilitará al Registro para la impresión de la correspondiente Clave Unica de Revista (CUR).

A tal efecto se registrará dicha alta, el primer día del mes siguiente a la fecha de proceso.

5.- Una vez cumplida la instancia indicada en el punto anterior, el Registro arbitrará los medios para el envío de la Clave Unica de Revista (CUR) y credencial que acredite la titularidad de la categoría Monotributista Social del Régimen Simplificado Para Pequeños Contribuyentes.

Asimismo, la constancia original de adhesión al Monotributo Social del sector agropecuario será remitida plastificada por correo postal al domicilio del solicitante respectivo, a efectos de acceder rápidamente al ejercicio de los derechos que le asisten en tal carácter.

6.- La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, todos los meses efectuará un proceso en el que se incluirá a los Monotributistas Sociales del sector agropecuario registrados (entendiéndose por tales aquellos cuyos datos hayan sido correctamente procesados al último día hábil del mes anterior) y generará uno o varios archivos que contendrán la nómina de los sujetos por cuenta de quienes efectúe el pago el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA y el monto que deberá ingresar por cada uno, para ese período mensual.

7.- El Registro informará al MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA las solicitudes de inscripción que hayan sido denegadas, y los casos que no cumplen los requisitos para adherir al Monotributo Social, según las Resoluciones N° 762 de fecha 18 de abril de 2005 y N° 1152 de fecha 5 de julio de 2006, ambas del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

8.- La SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR efectuará, por cuenta y orden de cada Monotributista Social del sector agropecuario, el pago mensual del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del aporte a la obra social, de acuerdo con la información referida en el punto 6 del presente Anexo, mediante el procedimiento previsto en la Resolución General (AFIP) N° 1778, su modificatoria y complementarias.

A tal efecto deberá acceder a través del sitio web de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (www.afip.gob.ar), al servicio de Clave Fiscal, esta última obtenida en los términos de la Resolución General (AFIP) N° 2239, sus modificatorias y complementarias.

El vencimiento para el pago de la obligación correspondiente a cada período mensual operará en las fechas establecidas por la Resolución General N° 2746 (AFIP) y sus modificatorias.

9.- La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, una vez efectuado el ingreso del importe respectivo, correspondiente a la nómina involucrada en ese período, lo transferirá a las obras sociales elegidas por cada Monotributista Social del sector agropecuario, así como también, procederá al cálculo del subsidio que estará a cargo del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

10.- El Registro gestionará el pago del citado complemento del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del aporte a la obra social del total del padrón activo, tal como lo establece la Resolución Conjunta N° 249 y N° 853 de fecha 18 de julio de 2006 de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y de la SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO, respectivamente.

2. LEGISLACION PROVINCIAL

2.1. BUENOS AIRES

- **LEY 13.136**

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Sancionan con fuerza de LEY:

CAPITULO I

GENERALIDADES (artículos 1 al 6)

ARTICULO 1: Promoción. Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS): Declárese de Interés Provincial el apoyo y promoción de las Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS), que se desarrollan en el marco de la denominada Economía Social y a la adecuada organización y difusión de sus fines, articuladas a las estrategias de desarrollo local y regional.

ARTICULO 2: Objetivos: Son objetivos de la presente Ley:

- a) Proteger y promover la producción y comercialización de bienes y servicios de asociaciones informales que tienen como fin lograr la autosubsistencia de sus integrantes.
- b) Propender a la actividad regular de dichas asociaciones informales mediante la cooperación, creatividad y el desarrollo personal y comunitario.
- c) Promover la capacitación de los emprendedores.
- d) Favorecer el desarrollo endógeno local.
- e) Promocionar la inscripción de organizaciones locales, regionales y provinciales que generen proyectos, promuevan emprendimientos e incorporen mano de obra.
- f) Dotar de capital de trabajo inicial y apoyo a los nuevos emprendimientos.
- g) Apoyar y ampliar las instituciones de Banca Social.
- h) Apoyar las organizaciones que tienen base en la familia, la solidaridad y la cooperación.
- i) Promover la incorporación y transferencia de tecnología apropiada.
- j) Ofrecer apoyo técnico e información sobre la economía social en cada municipio, incorporando los recursos profesionales de la Provincia, los Municipios y las Universidades e Institutos Tecnológicos.

ARTICULO 3: Ámbito de Aplicación. Quedan sometidas a las prescripciones de la presente Ley aquellas actividades de contenido económico que poseen como principal objetivo la reproducción de la vida, la subsistencia y el autoempleo.

ARTICULO 4: Exclusión: Quedan excluidos de las prescripciones de la presente Ley aquellas actividades de contenido económico que poseen como objetivo fundamental fines de lucro y acumulación de capital.

ARTICULO 5: Autoridad de Aplicación: Será Autoridad de Aplicación de la presente Ley, el organismo provincial que establezca políticas sobre relaciones laborales, promoción de empleo productivo, desarrollo social, acción solidaria y bienestar de la población bonaerense.

Los Consejos Locales Económicos Sociales serán los encargados de otorgar y promover los beneficios establecidos en la presente.

La Autoridad de Aplicación será fiscalizadora de los Consejos Locales Económicos Sociales en cuanto al cumplimiento de esta Ley.

ARTICULO 6: Funciones. Autoridad de Aplicación: Son funciones de la Autoridad de Aplicación:

- a) Fiscalizar el cumplimiento de la presente Ley.
- b) Administrar el Fondo de la Economía Social.
- c) Apoyar el crecimiento y desarrollo de las Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS).
- d) Divulgar el concepto de cultura emprendedora, desde y a través de todos los niveles del sistema educativo.
- e) Fomentar la compra de bienes y servicios a través de mecanismos adecuados a la capacidad del sector.

- f) Proteger a los emprendedores de distorsiones económicas que les generen perjuicio.
- g) Facilitar el acceso a canales de comercialización.
- h) Procurar que los insumos y la tecnología utilizada cumplan las normas de protección y sustentabilidad ambiental.
- i) Procurar la incorporación de los emprendedores y su núcleo familiar a programas de seguridad social.
- j) Implementar mecanismos idóneos que faciliten el cumplimiento por los emprendedores de las normas bromatológicas.
- k) Promocionar formas asociativas que permitan el sostenimiento de los emprendedores y sus familias.
- l) Formar y capacitar, a través de organizaciones públicas y privadas, a los emprendedores sobre aspectos técnicos de producción, comercialización y gestión; valores de convivencia del grupo y la comunidad; la utilización de los recursos naturales sobre la base de la defensa del ambiente; comportamiento ético y solidario; innovación y transferencia tecnológica apropiada, asesoría y consultoría.

CAPITULO II

CARACTERES (artículos 7 al 9)

ARTICULO 7: Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia: Entiéndese a los efectos de la presente ley, por Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS), a aquellas asociaciones informales dedicadas a la producción, comercialización, intermediación de productos y/o servicios, que reúnan simultáneamente las siguientes características:

- a) Esté integrada por hasta diez (10) personas asociadas, incluyendo a los socios y su grupo familiar, y/o hasta dos socios no familiares y su grupo familiar incluidos en el total.
- b) No posea activos fijos, o en caso de poseerlos, tengan un valor inferior a cincuenta (50) montos equivalentes a una "canasta básica total para el adulto equivalente hogar ejemplo", de acuerdo con el índice mensual del INDEC, para todos los miembros sumados, excluidos los inmuebles destinados a vivienda.
- c) Cuando los ingresos brutos anuales para cada uno de los miembros de las Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS) sean menores al ingreso correspondiente al equivalente de treinta (30) "canastas básicas totales para el adulto equivalente-hogar ejemplo" de acuerdo con el índice mensual del INDEC. La reglamentación de la presente podrá identificar nuevas características de las Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS) en función de las particularidades de cada región de la Provincia de Buenos Aires, sin exceder el marco del párrafo anterior.

ARTICULO 8: Instrumentos: La Autoridad de Aplicación, para la ejecución de la presente Ley, utilizará como instrumentos las sociedades laborales, las cooperativas de trabajo, de producción, de consumo, la microbanca, los grupos de autoahorro y autocrédito, operaciones de intercambio de bienes y servicios y cualquier otra actividad económica basada en los principios del trabajo asociado, la solidaridad, la inserción plena de trabajadores y sus familias en la sociedad, el rescate de la cultura del trabajo como valor social esencial y la satisfacción del bienestar general de la comunidad, concebidas como un sistema de desarrollo local integrado.

ARTICULO 9: Centro de Iniciativas: Los Centros de Iniciativas serán los Consejos Locales Económicos Sociales, de acuerdo con los instructivos emanados por la Autoridad de Aplicación.

CAPITULO III

BENEFICIARIOS (artículos 10 al 13)

ARTICULO 10: Beneficiarios: Se consideran beneficiarios a los efectos de la presente Ley, a las Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS). La reglamentación de la presente establecerá los requisitos específicos referidos a su incorporación y exclusión.

ARTICULO 11: Procedimiento: La Autoridad de Aplicación deberá establecer el procedimiento para la incorporación o la exclusión de las Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS) en el marco de la presente Ley, el cual deberá consistir en un régimen simplificado que permita eficacia y eficiencia administrativa, con participación de los Consejos Locales Económicos Sociales.

ARTICULO 12: Gratuidad: Los trámites efectuados mediante este procedimiento no ocasionarán costo alguno a las Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia.

ARTICULO 13: Registro de Beneficiarios: La Autoridad de Aplicación deberá establecer un registro oficial de emprendedores, con el objeto de identificar los sujetos beneficiarios de la presente Ley.

CAPITULO IV

BENEFICIOS (artículos 14 al 15)

ARTICULO 14: Beneficios: Las Actividades

Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS) que se acojan a la presente ley tendrán los siguientes beneficios:

- a) Exención del Impuesto a los Ingresos Brutos.
- b) Incentivos emanados del Fondo de la Economía Social.
- c) Créditos provenientes de la Banca Social.

ARTICULO 15: Servicios Públicos: La Autoridad de Aplicación, en el marco regulatorio de los servicios públicos, gestionará la inclusión de las Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS) en los regímenes de Tarifas de Interés Social.

CAPITULO V

DISPOSICIONES GENERALES (artículos 16 al 20)

ARTICULO 16: Estadísticas: La Autoridad de Aplicación deberá crear un sistema estadístico e informativo de y para el sector y los beneficiarios que se acojan en la presente Ley.

ARTICULO 17: Infracciones a la Ley: A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, quedarán sin efecto los procedimientos administrativos provinciales, que se encuentren en curso por infracciones de carácter formal, relacionados con los beneficios que esta ley otorga por el artículo 15, respecto a las Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS) que se acojan a las disposiciones de la presente Ley.

ARTICULO 18: Presupuesto: Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.

ARTICULO 19: Adhesión: Se invita a los Municipios a adherir a la presente Ley, pudiendo eximir de las respectivas tasas locales y promover otros beneficios para las Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS) que se acojan a sus disposiciones, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 6769/58 (LOM-Ley Orgánica Municipal).

• DECRETO REGLAMENTARIO 2993/06

DECRETO REGLAMENTARIO - DECLARACION DE INTERES PROVINCIAL - ACTIVIDADES LABORALES - ACTIVIDADES ECONOMICAS

VISTO

El expediente N° 21.701-542/04, por el cual se propicia la Reglamentación de la Ley 13.136, y

CONSIDERANDO

Que mediante la Ley 13.136 se declara de Interés Provincial el apoyo y promoción de las Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS), las que se desarrollan en el marco de la denominada Economía Social y a las que la Ley define como las asociaciones informales dedicadas a la producción, comercialización, intermediación de productos y/o servicios, cuya actividad posea como principal objetivo la

reproducción de la vida, la subsistencia y el autoempleo, debiendo reunir ciertas características para acceder a los beneficios que la Ley prevé;

Que la norma legal enuncia sus objetivos, entre los cuales cabe destacar la protección y promoción de la producción y comercialización de bienes y servicios de asociaciones informales que tienen como fin la autosubsistencia de sus integrantes, el favorecimiento del desarrollo endógeno local, el apoyo y la ampliación de las instituciones de la Banca Social y el apoyo a las organizaciones que tienen base en la familia, la solidaridad y la cooperación, como así también los beneficios que gozarán las actividades que se acojan a la norma, tales como exención del Impuesto a los Ingresos Brutos, incentivos emanados del Fondo de la Economía Social, y créditos provenientes de la Banca Social;

Que las actividades protegidas por la Ley 13.136 revisten básicamente el carácter de emprendimientos locales de subsistencia que no constituyen entes empleadores con un fin lucrativo por encima del concepto de distribución igualitaria y/o acumulación de capital en beneficio de una de las partes, sino establecimientos de producción familiar, cuyos ingresos no provienen de la explotación de empresas sino exclusivamente de su actividad productiva caracterizada por la ausencia de la división orgánica del trabajo y la existencia de una escasa división técnica del mismo, en los que tampoco existe la separación entre trabajo y capital ya que sus propios dueños y su familia se constituyen en trabajadores;

Que el artículo 5º de la Ley 13.136 establece que la Autoridad de Aplicación será el organismo provincial que establezca políticas sobre relaciones laborales, promoción de empleo productivo, desarrollo social, acción solidaria y bienestar de la población bonaerense, la cual fiscalizará a los Consejos Locales Económicos Sociales, y en forma directa o por delegación expresa a todos los emprendimientos registrados por la ley;

Que a la luz de las competencias asignadas a los Ministerios de Trabajo y Desarrollo Humano, por la Ley de Ministerios 13.175, esas jurisdicciones se constituyen como los organismos provinciales cuyas competencias resultan abarcadoras de los objetivos plasmados en la norma legal, pues le corresponde al Ministerio de Trabajo, entre otras, determinar las políticas de empleo, ser la autoridad de aplicación en materia de políticas activas de promoción del empleo en el territorio provincial, laborar y proponer políticas, planes, proyectos y programas de generación de empleo en la provincia con el objeto de elevar la posibilidad de ingreso al mercado formal de trabajo de los trabajadores desocupados, la adopción de estrategias orientadas al desarrollo socioeconómico local de carácter endógeno y el incentivo a la asociación público-privada a nivel municipal para el desarrollo de políticas de desarrollo local, y coordinar acciones con ministerios y otros organismos provinciales, universidades, organizaciones no gubernamentales referidas a los mecanismos de promoción, apoyo a pequeñas y microempresas, microunidades productivas y formas organizativas de este sector de la economía en materia de empleo, y promover planes y políticas de empleo que acompañen el crecimiento y expansión de las economías regionales y al Ministerio de Desarrollo Humano le corresponde, entre otras, la determinación de las políticas necesarias para la protección de la familia, el bienestar de la población bonaerense y en general el pleno desarrollo humano incentivando la acción solidaria;

Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno;

Que por lo expuesto y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 144 inc. 2º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, corresponde dictar el pertinente acto administrativo;

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DECRETA:

ARTICULO 1º. Aprobar la Reglamentación de la Ley 13.136 de Promoción de las Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS), cuyo texto pasa a formar parte integrante del presente como Anexo I.

ARTICULO 2º. El presente Decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Trabajo y Desarrollo Humano.

ARTICULO 3º. Regístrese, comuníquese, publíquese, dese al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archívese.

FIRMANTES

VARELA-Solá-Mouillerón

ANEXO A: ANEXO I REGLAMENTACION DE LA LEY 13.136

CAPITULO I

GENERALIDADES (artículos 1 al 6)

ARTICULO 1º. Los Ministerios de Trabajo y de Desarrollo Humano serán la Autoridad de Aplicación de la Ley 13.136, de Promoción de las Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS).

ARTICULO 2º. La promoción, el fomento y el otorgamiento de los beneficios y alcances de la Ley 13.136 estarán a cargo de la autoridad de Aplicación, de los Consejos Locales Económicos Sociales (CLES), y de los Gobiernos Municipales.

En los distritos en que los Consejos Locales Económicos Sociales (CLES) no se encuentren constituidos, la promoción, el fomento y el otorgamiento de los beneficios estarán a cargo de los Municipios.

ARTICULO 3º. A los fines del efectivo cumplimiento de los objetivos especificados en Artículo 2º de la Ley 13.136 y de las funciones contempladas en el Artículo 6º del citado cuerpo legal, los Ministerios de Trabajo y de Desarrollo Humano como Autoridad de Aplicación conformarán equipos administrativos y técnicos competentes a efectos de desarrollar en forma conjunta las siguientes funciones:

a) Asistir a los emprendedores apoyando el crecimiento y desarrollo de las Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS).-

b) Facilitar y promover, en coordinación con el sector estatal y privado, los servicios de desarrollo microempresarial para los emprendedores que lo necesiten, tales como capacitación y asistencia técnica, formación de recursos humanos, fortalecimiento de la cultura empresarial, asesoramiento para la preparación de proyectos y/o constitución de nuevas microempresas y consolidación o ampliación de las existentes, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología, gestión de calidad y de competitividad, así como consultoría y gestión microempresarial.

c) Promover acciones y marcos regulatorios necesarios para lograr el abaratamiento de las compras de insumos y mercaderías y del costo de la canasta familiar, la modificación de la cadena y canales de comercialización, ello sin desmerecer la espontaneidad de la creatividad popular, fomentando asimismo los principios de solidaridad y cooperación como ejes fundamentales de la actividad de las Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS), y asimismo monitorear las actividades de comercialización y el diseño de nuevos canales, adaptando los existentes y protegiendo a las Unidades mencionadas de las distorsiones del mercado.

d) Difundir la cultura emprendedora y las actividades laborales de autoempleo y subsistencia por sí y/o en conjunto con otras áreas gubernamentales.

e) Realizar una política de promoción de los aspectos relativos a las formas asociativas que favorezcan la comercialización y la organización legal, administrativa y de gestión que confluya al sostenimiento de las familias protagonistas en coordinación con los organismos correspondientes.

f) Promover toda clase de asociación legítima de los emprendedores, priorizando aquellas formas y organizaciones que tomen como base la familia, la solidaridad, la cooperación, la creatividad, el desarrollo personal y comunitario.

g) Facilitar la articulación de las actividades emprendedoras en el marco de proyectos de desarrollo local y microregional, y procurar la integración horizontal y vertical de las Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS).

De ser necesaria la realización de acciones conjuntas no especificadas precedentemente, ambos Ministerios, a tales fines, deberán celebrar acuerdos o convenios de asistencia e incumbencia recíproca.

ARTICULO 4º. Dentro de las funciones contempladas en el Artículo 6º de la Ley 13.136 como propias de la Autoridad de Aplicación y a los fines del efectivo cumplimiento de los objetivos especificados en Artículo 2º de la normativa precedentemente citada, le corresponden de forma exclusiva a cada uno de los Ministerios las siguientes:

1. Ministerio de Desarrollo Humano:

a) Promover y asistir las instituciones de la Banca Social.

b) Facilitar el acceso al Capital inicial y de desarrollo de los emprendedores.

2. Ministerio de Trabajo:

a) Crear el registro oficial de beneficiarios estipulado por la Ley 13.136.

b) Expedir la acreditación como beneficiario y/u otorgamiento del Registro Provincial en caso que la expedición sea efectuada por el gobierno municipal.

c) Fiscalizar el funcionamiento de los emprendimientos.

ARTICULO 5º. Conforme lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 13.136, se excluyen de los alcances de dicha norma a los emprendimientos donde: a) Se pruebe la existencia de relación de dependencia entre sus integrantes. b) Exista relación de subordinación, en cuanto a la toma de decisiones, entre los integrantes del emprendimiento que únicamente presten tareas y quienes además aporten capital.

ARTICULO 6º. A efectos de definir las características fijadas por el Artículo 7º, incisos b) y c) de la Ley 13.136 y simplificar el cálculo anual de ingresos de la Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS), el valor de "Canasta Básica Total para el Adulto equivalente - Hogar Ejemplo" será tomado del primer informe anual del INDEC y se considerará válido para todo el año al cual se refiere.

ARTICULO 7º. El Ministerio de Desarrollo Humano apoyará y ampliará las instituciones de Bancas Sociales existentes y administrará la Banca Social Pública de la Provincia de Buenos Aires, facilitando el acceso al capital inicial y de desarrollo de los emprendedores.

ARTICULO 8º. El Ministerio de Desarrollo Humano podrá celebrar todo tipo de acuerdo y/o convenio con entidades públicas y privadas a fin de constituirse como administradora de fondos destinados a la promoción y el desarrollo de las Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS).

ARTICULO 9º. El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de los mecanismos que se implementen en cumplimiento de las normas que rigen los procedimientos de asistencia y promoción de la Banca Social, otorgará los beneficios enunciados por el Artículo 14 de la Ley 13.136 a las Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS) que se encuentren registradas.

Dichos beneficios subsistirán en tanto las Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS) cumplan con los requisitos exigidos por la Ley 13.136.

El Ministerio de Desarrollo Humano determinará la forma en que se instrumentarán los beneficios contemplados en los artículos 14 y 15 de la Ley 13.136.

CAPITULO III

FUNCIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO (artículos 10 al 12)

ARTICULO 10. El Ministerio de Trabajo impulsará los medios necesarios tendientes a lograr:

- a) La generación de sistemas de compra local.
- b) El cumplimiento de los controles ambientales, comerciales y aquellos que se relacionen con las actividades enmarcadas en la Ley 13.136.
- c) La certificación del contenido de todo curso dictado a los microemprendedores vinculado a su actividad.
- d) La gratuidad de los trámites.

ARTICULO 11. El Ministerio de Trabajo, en los emprendimientos de las Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS), abocados a la manipulación de productos alimenticios, impulsará el procedimiento para efectuar controles bromatológicos y de buenas prácticas para garantizar la salud de la población destinataria.

ARTICULO 12. El Ministerio de Trabajo dictará las disposiciones complementarias que resultaren necesarias para el cumplimiento de los objetivos fijados en la Ley 13.136. La redacción de las mismas se realizará en consenso entre el Ministerio de Trabajo y el de Desarrollo Humano.

CAPITULO IV

REGISTRO UNICO PROVINCIAL DE UNIDADES ECONOMICAS DE ACTIVIDADES LABORALES DE AUTOEMPLEO Y SUBSISTENCIA (ALAS) (artículos 13 al 21)

ARTICULO 13. Crear, el Registro único Provincial de Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS), en el ámbito del Ministerio de Trabajo, organismo en el que tendrá su lugar de asiento.

ARTICULO 14. Los beneficiarios de la Ley 13.136, de Promoción de Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS), deberán inscribirse en el Registro énico creado a tales fines

ARTICULO 15. Para solicitar la inscripción los emprendimientos deberán cumplir como mínimos con los siguientes requisitos:

Contar como mínimo con el Libro Diario y el Libro de Inventario (conforme artículo 44 subsiguientes y concordantes del Código de Comercio), ambos identificados con su número de registro por parte del organismo competente, lo cual deberá cumplimentarse dentro de los noventa (90) días corridos a partir de la fecha determinada en el inciso siguiente. Los libros comenzarán a ser usados a partir de que el emprendedor concluya los trámites correspondientes, lo cual será certificado por el Ministerio de Trabajo con fecha fehaciente.

ARTICULO 16. Para iniciar los trámites de inscripción se habilitarán oficinas receptoras de las solicitudes, las que tendrán lugar de asiento en:

- a) El Ministerio de Trabajo,
- b) El Ministerio de Desarrollo Humano,
- c) Los Municipios.

A tales efectos, el Ministerio de Trabajo otorgará los formularios de registro y habilitará las facultades delegadas en los municipios.

ARTICULO 17. Los emprendedores que se acojan al régimen creado por la Ley 13.136, deberán presentar una solicitud con carácter de Declaración Jurada ante el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Humano o Municipio para obtener la inscripción en el Registro énico Provincial de Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS), conforme al modelo que se adjunta como Anexo A. El Ministerio de Trabajo emitirá un formulario identificador numerado y sellado, el que llevará impreso la frase "Emprendimiento amparado por la Ley de Promoción de Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia" (ALAS) conforme al modelo que se adjunta como Anexo B.

El Ministerio de Trabajo tendrá la facultad de delegar en los Municipios que adhieran a la Ley 13.136, la recepción de la documentación necesaria para efectuar el trámite de registro.

ARTICULO 18. Al Ministerio de Trabajo deberán ser derivadas todas las solicitudes de inscripción y la documentación correspondiente que fuera recibida por los Municipios y el Ministerio de Desarrollo Humano, para la ulterior evaluación, aprobación e inscripción de los emprendimientos en el Registro énico Provincial de Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS).

ARTICULO 19. Las solicitudes presentadas e impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Humano no podrán ser rechazadas sin acuerdo fundado de ambos Ministerios.

ARTICULO 20. El trámite de solicitud de inscripción podrá ser realizado por personal del Municipio que abarque la Microregión del domicilio del emprendedor, previa adhesión a la Ley 13.136, por el Ministerio de Trabajo o por el Ministerio de Desarrollo Humano y consistirá en:

- a) Confeccionar una Solicitud Simplificada de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya los datos básicos necesarios para la identificación y acompañamiento de las Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS), conforme al modelo que se adjunta como Anexo A.
- b) Consignar, una vez evaluada y aprobada la solicitud e inscripto el emprendimiento por el Ministerio de Trabajo en el registro, el número de registro de la Unidad Económica de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS) en un formulario oficial, observando el procedimiento señalado en el artículo precedente, conforme se detalla en el Anexo B.

ARTICULO 21. Los Municipios habilitados conforme el artículo 13 del presente, suministrarán mensualmente al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Desarrollo Humano copia certificada de los trámites allí iniciados y de los datos consignados en los mismos, a los efectos del seguimiento y fiscalización del cumplimiento de la Ley 13.136, como así también para su utilización con fines de información e interpretación para los emprendedores inscriptos.

Toda persona pública o privada, previa solicitud fundada, tendrá acceso a los registros y a los datos en ellos consignados.

LEY 14650

**EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
SANCIONAN CON FUERZA DE**

LEY

ARTÍCULO 1º: Créase el Sistema de Promoción y Desarrollo de la Economía Social y Solidaria de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2º: A los efectos de esta Ley se entenderá por Economía Social y Solidaria a la estrategia de desarrollo basada en la promoción y fomento de relaciones económicas con perspectiva de derechos humanos, en las que debe primar la dignidad de las personas. Comprende al conjunto de recursos y actividades, de personas, instituciones y organizaciones, que operan según principios de solidaridad, cooperación y autoridad legítima, la apropiación y disposición de recursos, en la realización de actividades de producción, distribución, circulación, financiamiento y consumo digno y responsable, cuyo sentido es la resolución de las necesidades de los trabajadores, sus familias y comunidades, y del medio ambiente; para lograr una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria.

ARTÍCULO 3º: A los efectos de esta Ley se consideran integrantes de la Economía Social y Solidaria a las personas físicas o grupos asociativos que basen su accionar en las premisas expresadas por el artículo 2º, que se organicen en torno a la gestión del autoempleo, en un marco de economía justa y solidaria.

También integran la Economía Social y Solidaria, las cooperativas de trabajo, mutuales, asociaciones civiles, fundaciones, agrupaciones de microemprendedores, emprendimientos comunitarios, clubes del trueque, ferias y mercados asociativos populares, redes de comercio justo, organizaciones de microcrédito, bancos populares, empresas recuperadas, redes de consumo responsable, organizaciones libres del pueblo sin fines de lucro, u otras cuyas actividades se encuadren dentro del marco descripto en el artículo 2º.

ARTÍCULO 4º: Son objetivos de la presente Ley

- a) Diseñar una Planificación Estratégica Participativa, a corto, mediano y largo plazo tendiente a la construcción de una política pública integrada y articulada de la Economía Social y Solidaria en todo el territorio de la Provincia;
- b) b) Instituir acciones de valoración de los saberes populares en materia de economía social y promover la validación institucional de los mismos;
- c) Incentivar valores sociales basados en la igualdad, la solidaridad, la autogestión, la ayuda mutua y la justicia social que fomenten la construcción de comunidad y la organización popular;
- d) Fortalecer el trabajo y reconocer la importancia política del sector de economía social en el actual modelo de acumulación;
- e) Vincular los sectores productivos basados en la economía social y solidaria en relación al modelo de desarrollo de la Provincia de Buenos Aires;
- f) Propiciar la movilidad social ascendente de los sectores populares;
- g) Diseñar mecanismos financieros, económicos, educativos, sociales y culturales para fomentar el crecimiento y consolidación de una socioeconomía;
- h) Fomentar los diversos modos de producir, comercializar y distribuir bienes y servicios basados en la concepción de la economía social y solidaria;
- i) Promover la concreción de respuestas institucionales del Estado a las necesidades del sector en relación al financiamiento de actores;
- j) Proponer y ejecutar un sistema de formalización y cuantificación de los sujetos pertinentes, a través de la articulación con otros organismos provinciales y nacionales; y la implementación de un régimen diferencial de exención ágil y eficaz de impuestos, tasas y contribuciones de orden provincial, así como una gestión eficaz en inscripciones correspondiente a diversos productos y/o servicios, como así también a una adecuación de los estándares requeridos para las normas de calidad para los emprendimientos de la economía social;
- k) Crear un registro provincial de actores de la economía social: a fin de gestionar políticas de acompañamiento y financiamiento de los procesos productivos, de comercialización y consumo del sector;

- l) Implementar programas de educación de los distintos niveles, que brinden capacitación y asesoramiento destinados a mejorar los procesos de organización, de producción y comercialización de los productos de la Economía Social y a transmitir e incorporar sus principios y valores en la sociedad;
- m) Promover el desarrollo de tecnologías adecuadas a las necesidades y condiciones de los emprendimientos de la Economía Social y Solidaria.

ARTÍCULO 5º: AUTORIDAD DE APLICACIÓN: El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación. La misma apuntará a fomentar y promover las actividades de la Economía Social y Solidaria, gestionando y proponiendo políticas públicas que desarrollen y potencien este segmento socioeconómico en la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 6º: La Autoridad de Aplicación tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Impulsar una Planificación participativa y estratégica junto con los diversos actores de la Economía Social y Solidaria;
- b) Impulsar la constitución de Consejos Regionales de la Economía Social y Solidaria en todas las secciones electorales de la Provincia;
- c) Registrar a las Unidades de la Economía Social y Solidaria que soliciten su incorporación en el régimen de Promoción, comprendidas en los límites que se establezcan;
- d) Organizar y realizar estudios e investigaciones de carácter jurídico, económico, contable, organizativo y social sobre la materia de su competencia; para lo cual podrá emprender cursos, conferencias, congresos y/o publicaciones;
- e) Promover la actualización permanente y adecuación de la legislación vigente concerniente al sector de la Economía Social y Solidaria;
- f) Promover juntamente con los organismos competentes una política fiscal, tributaria y previsional que procure la formalización y seguridad social de los trabajadores - productores, promotores y organizaciones de la Economía Social;
- g) Relevar y sistematizar periódicamente estadísticas e información del sector de la Economía Social y Solidaria;
- h) Promover la asociatividad e integración de productores y consumidores en condiciones o riesgos de exclusión económica, social y cultural;
- i) Facilitar el acceso al financiamiento con fondos propios o por vinculación con otros organismos, a proyectos sustentables, que se enmarquen dentro de los principios descriptos en la presente Ley;
- j) Evaluar y monitorear proyectos socioprodutivos viables para su financiamiento y/o financiados por acciones emprendidas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires;
- k) Coordinar y vincular su acción con los entes públicos y privados, educativos, productivos y financieros;
- l) Apoyar la comercialización de los bienes y/o servicios producidos por el sector de la Economía Social;
- m) Organizar eventos de promoción de las actividades propias de la Economía Social;
- n) Crear comercializadoras y marcas colectivas, entre otros;
- o) Promover la creación de centros de producción y de cocinas comunitarias, acordes a las normas bromatológicas que la Provincia establece;
- p) Capacitar, asistir y asesorar técnicamente en materia de: planificación, formulación de proyectos de negocios, gerenciamiento administrativo, comercial y productivo, capital humano, procesos grupales y asociativismo, mejora continua de productos y servicios;
- q) Promover prácticas protectoras del medio ambiente y del consumo responsable;
- r) Realizar seguimiento, evaluación y control de las instituciones inscriptas en el Registro de Efectores de la Economía Social de la Provincia de Buenos Aires (artículo 12), a fin de asegurar que las actividades de las mismas se correspondan con sus respectivos objetivos, pudiendo disponer la aplicación de sanciones en caso de detectar incumplimiento por parte de los integrantes del régimen;
- s) Facilitar el acceso a los procesos de innovación tecnológica a los emprendedores de la Economía Social;
- t) Asesorar y asistir en los alcances del régimen de promoción que establece esta Ley.

ARTÍCULO 7º: La Autoridad de Aplicación estará asistida por un Consejo Provincial de Economía Social y Solidaria, el cual estará integrado por: 1) tres (3) funcionarios representantes de áreas gubernamentales de ministerios y/u organismos provinciales definidos en el reglamento de la presente Ley; 2) dos (2) miembros del Poder Legislativo, uno por la Cámara de Diputados, y uno por la Cámara de Senadores; 3) tres (3) miembros integrantes de organizaciones, foros o redes de la economía social, con reconocida trayectoria en la materia; 4) un (1) miembro del sector académico, de reconocida trayectoria en la materia; 5) dos (2) representantes de municipios de la Provincia de Buenos Aires; 6) un (1) representante del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

El Consejo Provincial de Economía Social y Solidaria será dirigido y representado por un Presidente designado entre sus miembros y de acuerdo a lo que disponga la reglamentación.

ARTÍCULO 8º: En cada Sección Electoral funcionará un Consejo Regional de la Economía Social y Solidaria, a fin de favorecer el diálogo político y el diseño y monitoreo de políticas tendientes al desarrollo de la economía social en la Provincia de Buenos Aires, entre el Estado Provincial, los Estados Locales, las organizaciones sociales, los sectores productivos, instituciones educativas y otros actores de la Economía Social y Solidaria.

ARTÍCULO 9º: La Autoridad de Aplicación constituirá los Consejos Regionales de la Economía Social y Solidaria, promoviendo su integración por los Legisladores y Legisladoras de la Provincia de Buenos Aires, Intendentes Municipales, representantes de los Concejos Deliberantes, funcionarios provinciales con funciones en el Municipio y representantes de las organizaciones de la Economía Social, que se describen en el artículo 3º.

ARTÍCULO 10: La Autoridad de Aplicación promoverá una Política Fiscal, Tributaria y Previsional que procure la formalización y seguridad social de trabajadores, productores, promotores y organizaciones de la Economía Social.

ARTÍCULO 11: La Autoridad de Aplicación ejercerá control y auditará los fines y usos de los beneficios fiscales y financieros que otorgare el Estado Provincial.

ARTÍCULO 12: Créase el “Registro de Efectores de la Economía Social y Solidaria de la Provincia de Buenos Aires”, donde se inscribirá a todas las entidades y/o personas que formen parte de la actividad caracterizada como Economía Social, cuyas actividades se enmarquen dentro de los principios descritos en el artículo 2º de la presente Ley. La Autoridad de Aplicación, tendrá a su cargo la organización del mismo y establecerá el procedimiento de inscripción, actualización y control. Este registro se articulará con el Registro de la Agricultura Familiar y el Registro de Efectores del Monotributo Social, ya existentes. La reglamentación deberá respetar, entre los requisitos a cumplirse para integrar dicho registro, la efectiva actuación conforme a los principios de la economía social. El Registro de Efectores deberá relevar y sistematizar periódicamente estadísticas e información del sector de la Economía Social.

ARTÍCULO 13: El Estado Provincial otorgará a todas las personas físicas y/o jurídicas que se encuentren debidamente registradas en el “Registro de Efectores de la Economía Social de la Provincia de Buenos Aires” y en el “Registro Nacional de Efectores”, exención impositiva en los tributos provinciales de ingresos brutos y de sellos por las actividades que realicen en el marco de la presente Ley, sujeto al cumplimiento de los procedimientos que a tal fin establezca la ARBA.

ARTÍCULO 14: El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires promoverá una política de compras y contrataciones del Estado, en las distintas reparticiones de la Provincia para la provisión de bienes y servicios que priorice a los inscriptos en el Registro de Efectores de la Economía Social y Solidaria de la Provincia de Buenos Aires, incorporando hasta un cinco por ciento (5%) de las adquisiciones anuales del Estado Provincial.

ARTÍCULO 15: Modifíquese el segundo párrafo del artículo 25 Bis de la Ley N° 7.764 constituyendo el siguiente párrafo: “Asimismo, como mínimo el quince por ciento (15%) de las contrataciones deberá recaer en micro, pequeñas y medianas empresas, los emprendimientos registrados en el Registro Provincial de Efectores de la Economía Social y Solidaria de la Provincia de Buenos Aires, así como en consorcios y otras formas de colaboración integradas por las mismas, conforme lo determine la reglamentación”.

ARTÍCULO 16: Incorpórese como apartado u) del inciso 3) del artículo 26 de la Ley N° 7.764, el siguiente párrafo: “Las contrataciones de bienes y/o servicios que previo informe del Consejo Provincial de Economía Social y Solidaria, se celebren con personas físicas o jurídicas que se hallaren inscriptas en el Registro de Efectores de la Economía Social y Solidaria de la Provincia de Buenos Aires”.

ARTÍCULO 17: Créase el Fondo de Financiamiento para la Promoción de la Economía Social y Solidaria que estará destinado a apoyar, auspiciar, fomentar y ejecutar las políticas públicas implementadas por el Consejo Provincial de Economía Social y Solidaria.

Este Fondo será administrado por la Autoridad de Aplicación, debiendo incorporarse en el Presupuesto Anual de la Administración Provincial los rubros específicos de recursos, así como las partidas de erogaciones correspondientes.

Se integrará a partir de los siguientes recursos:

- a) Los aportes del Tesoro Provincial y otras asignaciones de recursos que fije anualmente la Ley de Presupuesto, o leyes especiales;
- b) Los aportes o transferencias provenientes del Estado Nacional, Provincial y/o Municipal, y de sus organismos autárquicos y/o descentralizados;
- c) Los recursos que le destinen leyes nacionales y provinciales;
- d) El producido de las operaciones realizadas con recursos del Fondo, así como los resultados por reintegros, intereses y sus accesorias de préstamos que se acuerden de conformidad a la presente Ley, y cualquier otro ingreso derivado de las actividades autorizadas al organismo de aplicación por la presente Ley;
- e) El importe que resulte del cero coma cinco (0,5%) por ciento de las utilidades netas por juegos y apuestas del Instituto Provincial de Lotería y Casinos. El Instituto Provincial de Lotería y Casinos deberá depositar el importe correspondiente dentro de los primeros quince (15) días del mes siguiente al de la liquidación, en la cuenta especial que deberá abrirse de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley;
- f) Los provenientes de legados, donaciones y/o cualquier otro tipo de liberalidades;
- g) Fondos provenientes de organizaciones y agencias públicas o privadas, nacionales o internacionales;
- h) Los fondos provenientes de contrataciones y prestaciones de servicios a organismos públicos e instituciones privadas.

ARTÍCULO 18: La Autoridad de Aplicación podrá disponer de hasta el diez por ciento (10 %) de los recursos que conforman este fondo para afrontar gastos de equipamiento y funcionamiento de las políticas públicas implementadas en el marco de la Economía Social.

ARTÍCULO 19: Los Municipios deberán adecuar las normas municipales referentes a la promoción de la Economía Social y Solidaria, a los fines de adherir a la presente Ley.

ARTÍCULO 20: El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente, garantizando su inmediata aplicación.

ARTÍCULO 21: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los dos días del mes de octubre del año dos mil catorce.

--

2.2. ENTRE RÍOS

Ley 10.151

Promulgada: 13 de julio de 2012

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS SANCIONA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1°.- Créase el Régimen de Promoción y Fomento de la Economía Social de la provincia de Entre Ríos.

ARTÍCULO 2°: Objetivos:

- a) Incentivar valores sociales basados en la igualdad, la solidaridad, la autogestión, la ayuda mutua y la justicia social;
- b) Promover formas de organización dirigidas a satisfacer necesidades sociales, mediante mecanismos financieros, económicos, educativos, sociales y culturales;
- c) Fomentar el desarrollo de las actividades económicas, acorde a lo establecido en el artículo 2° de la presente ley.

ARTÍCULO 3°.- A los efectos de esta ley se entenderá por Economía Social al conjunto de actividades orientadas a la producción de bienes y servicios, a su distribución, circulación, y consumo de modo asociativo o comunitario, realizadas por personas y/o entidades que están organizadas de modo económicamente equitativo, y que operan regidas por los principios de participación democrática en la toma de decisiones, autonomía de la gestión, la primacía del ser humano y del fin social sobre el capital, y como productora y sostén para la soberanía alimentaria. Las prácticas de estos actores se

circunscriben en una conceptualización diferente de los factores de la producción, donde la solidaridad es el pilar para su funcionamiento, y su sentido no es el del lucro sin límites, sino la resolución de las necesidades de los trabajadores, sus familias y comunidades.

ARTÍCULO 4°.- A los efectos de esta ley se consideran integrantes de la Economía Social a las personas físicas o grupos asociativos en situación de vulnerabilidad social, que se organicen en torno a la gestión del autoempleo, en un marco de economía justa y solidaria, que realicen actividades de producción, de manufacturas, reinserción laboral de discapacitados, o comercialización de bienes o servicios, urbanos o rurales. También integran la Economía Social, las cooperativas de trabajo, mutuales, asociaciones civiles, fundaciones, agrupaciones de microemprendedores, emprendimientos comunitarios, clubes del trueque, ferias y mercados asociativos populares, redes de comercio justo, organizaciones de microcrédito, bancos populares, empresas recuperadas, redes de consumo responsable, organizaciones libres del pueblo sin fines de lucro, u otras cuyas actividades se encuadren dentro del marco descripto en el artículo 3°.

ARTÍCULO 5°.- El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Entre Ríos será la autoridad de aplicación de la presente ley, a fin de fomentar y promover las actividades de la Economía Social, gestionando y proponiendo políticas públicas que desarrollen y potencien este segmento socioeconómico de la Provincia.

ARTÍCULO 6°.- Créase el “Registro de Efectores de la Economía Social de la provincia de Entre Ríos”, donde se inscribirá a todas las entidades y/o personas integrantes de la Economía Social, cuyas actividades se enmarquen dentro de los principios descriptos en el artículo 3° de la presente ley. El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Entre Ríos tendrá a su cargo la organización del mismo y establecerá el procedimiento de inscripción, actualización y control.

ARTÍCULO 7°.- Las personas físicas y/o jurídicas inscriptas en el Registro de Efectores de la Economía Social de la provincia de Entre Ríos, deberán propiciar:

- a) La democracia participativa y la autogestión;
- b) La práctica de la solidaridad;
- c) La justicia social y la inclusión;
- d) El desarrollo local y el fomento del empleo.

ARTÍCULO 8°.- El Estado Provincial otorgará a todas las personas físicas y/o jurídicas que se encuentren debidamente registrados en el “Registro de Efectores de la Economía Social de la provincia de Entre Ríos” y en el “Registro Nacional de Efectores”, exención impositiva en los tributos provinciales de ingresos brutos y de sellos por las actividades que realicen en el marco de la presente ley, sujeto al cumplimiento de los procedimientos que a tal fin establezca la Administradora Tributaria de la provincia de Entre Ríos.

ARTÍCULO 9°.- Incorpórase como punto 15 del apartado b), inciso c), del artículo 27° de la Ley N° 5140, T.O. Decreto N° 404/95 MEOSP y modificatorios, el siguiente párrafo: *“Las contrataciones de bienes y/o servicios que previo informe del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, se celebren con personas físicas o jurídicas que se hallaren inscriptas en el Registro de Efectores de la Economía Social de la provincia de Entre Ríos, reciban o no financiamiento estatal”.*

ARTÍCULO 10°: En el marco de la presente ley serán facultades y obligaciones de la Autoridad de Aplicación:

- a) Promover conjuntamente con los organismos competentes una política fiscal, tributaria y previsional que procure la formalización y seguridad social de los trabajadores productores, promotores y organizaciones de la Economía Social;
- b) Promover la asociatividad e integración de productores y consumidores en condiciones o riesgos de exclusión económica, social y cultural;
- c) Fomentar el desarrollo de la economía social en áreas rurales;
- d) Facilitar el acceso al financiamiento, con fondos propios o por vinculación con otros organismos, a proyectos sustentables, que se enmarquen dentro de los principios descriptos en la presente ley;
- e) Difundir, asesorar e informar sobre programas de microcrédito provinciales, nacionales e internacionales;
- f) Evaluar y monitorear proyectos socio productivos viables para su financiamiento y/o financiados por acciones emprendidas por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Entre Ríos;

- g) Apoyar la comercialización de los bienes y/o servicios producidos por el sector de la Economía Social con la de organización de eventos de promoción y la creación de comercializadoras y marcas colectivas, entre otros;
- h) Promover la creación de centros de producción y de cocinas comunitarias, acordes a las normas bromatológicas que la Provincia establece;
- i) Promover prácticas protectoras del medio ambiente y del consumo responsable;
- j) Organizar y realizar estudios e investigaciones de carácter jurídico, económico, contable organizativo y social sobre la materia de su competencia;
- k) Releva y sistematizar, en forma periódica, estadísticas e información del sector;
- l) Coordinar y vincular su acción con los entes públicos y privados, educativos productivos y financieros;
- m) Capacitar, asistir y asesorar técnicamente en materia de: planificación, formulación de proyectos de negocios; gerenciamiento administrativo, comercial y productivo; capital humano, procesos grupales y asociativismo; mejora continua de productos y servicios;
- n) Realizar seguimiento, evaluación y control de las instituciones inscriptas en el Registro de Efectores de la Economía Social de la provincia de Entre Ríos, a fin de asegurar que las actividades de las mismas se correspondan con sus respectivos objetivos, pudiendo disponer la aplicación de sanciones en caso de detectar incumplimiento por parte de los integrantes del régimen;
- ñ) Facilitar el acceso a los procesos de innovación tecnológica a los emprendedores de la Economía Social;
- o) Asesorar y asistir en los alcances del régimen de promoción que establece esta ley.

ARTÍCULO 11°.- Créase el Consejo Provincial de las Organizaciones de la Economía Social, a fin de favorecer el diálogo político entre las organizaciones sociales y el Estado Provincial, y el diseño y monitoreo de políticas tendientes al desarrollo de la economía social en la Provincia.

ARTÍCULO 12°.- El directorio del Consejo Provincial de las Organizaciones de la Economía Social estará presidido por el Ministro de Desarrollo Social, e integrado por siete (7) vocales, dos (2) representantes del Poder Legislativo -uno (1) por cada Cámara Legislativa-, uno (1) en representación de los Presidentes Municipales, y tres (3) representantes de las organizaciones de la economía social, que se describen en el artículo 4° y que serán designados por las mismas, según lo describa la reglamentación correspondiente. Los integrantes del mismo funcionarán en carácter ad-honorem.

ARTICULO 13°.- En cada Departamento funcionará un Consejo de las Organizaciones de la Economía Social, a fin de favorecer el diálogo político entre las organizaciones sociales y el Estado provincial, y el diseño y monitoreo de políticas tendientes al desarrollo de la economía social en la Provincia.

ARTÍCULO 14°.- El referente territorial del Ministerio de Desarrollo Social será el Presidente del Directorio de los consejos departamentales que estará integrado por los Legisladores Provinciales, Presidentes Municipales y Comunales, funcionarios provinciales con funciones en el Departamento y representantes de las organizaciones de la economía social, que se describen en el artículo 4°.

ARTÍCULO 15°.- Créase el Fondo de Financiamiento para la Promoción de la Economía Social que estará destinado a apoyar, auspiciar, fomentar y ejecutar las políticas públicas de la economía social implementadas por el Ministerio de Desarrollo Social. Este Fondo será administrado por la autoridad de aplicación o el organismo que el Poder Ejecutivo determine, debiendo incorporarse en el Presupuesto Anual de la Administración Provincial los rubros específicos de recursos, así como las partidas de erogaciones correspondientes. Se integrará a partir de los siguientes recursos:

- a) Los aportes del Tesoro Provincial y otras asignaciones de recursos que fije anualmente la Ley de Presupuesto, o leyes especiales;
- b) Los aportes o transferencias provenientes del Estado Nacional, Provincial y/o Municipal, y de sus organismos autárquicos y/o descentralizados;
- c) El producido de las operaciones realizadas con recursos del Fondo, así como los resultados por reintegros, intereses y sus accesorias de préstamos que se acuerden de conformidad a la presente ley, y cualquier otro ingreso derivado de las actividades autorizadas al organismo de aplicación por la presente ley;
- d) El importe que resulte del cinco por ciento (5 %) de las utilidades netas por juegos y apuestas del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (I.A.F.A.S.). El I.A.F.A.S. deberá depositar el importe correspondiente dentro de los primeros quince (15) días del

mes siguientes al de la liquidación, en la cuenta especial que deberá abrirse de acuerdo a las disposiciones de la presente ley;

e) Los provenientes de legados, donaciones y/o cualquier otro tipo de liberalidades;

f) Fondos provenientes de organizaciones y agencias públicas o privadas.

ARTÍCULO 16°.- El Ministerio de Desarrollo Social podrá disponer de hasta el diez por ciento (10 %) de los recursos que conforman este fondo para afrontar gastos de equipamiento y funcionamiento de las políticas públicas implementadas en el marco de la Economía Social.

ARTÍCULO 17°.- Se invita a los Municipios y Comunas a la estandarización de las normas municipales referentes a la promoción de la Economía Social y a la correspondiente adhesión a la presente ley.

ARTÍCULO 18°.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente, garantizando su inmediata aplicación.

ARTICULO 19°.- Comuníquese, etcétera.

Sala de Sesiones. Paraná, 12 de julio de 2012.-

JOSE ORLANDO CACERES JOSE ANGEL ALLENDE

Presidente H. Cámara Senadores Presidente H. Cámara Diputados

MAURO G. URRIBARRI NICOLAS PIERINI

Secretario H. Cámara Senadores Secretario H. Cámara Diputados

2.3. LA RIOJA

LEY 8.901

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

ARTÍCULO 1°.- Foméntese el Movimiento Cooperativo en el ámbito de la provincia de La Rioja como parte integrante del sector social de la economía, con el fin de facilitar la organización, funcionamiento y expansión de su actividad socio-económica, relacionada con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.-

ARTÍCULO 2°.- Son objetivos de la presente Ley, los siguientes:

- a)** Impulsar las actividades de fomento cooperativo para proporcionar, asesoramiento, capacitación y formación para la constitución, consolidación, administración y desarrollo de las organizaciones cooperativas, así como la producción, comercialización y consumo de los bienes y servicios desarrollados para la actividad.
- b)** Realizar actos jurídicos en materia civil y administrativa y aquellos de carácter socio-económicos, que tengan como fin abrir, conservar, proteger y expandir las fuentes de empleo, producción y desarrollo en el sector social, procurando otorgar condiciones de factibilidad y simplificación administrativa para su legal funcionamiento.
- c)** Llevar a cabo acciones de registro, investigaciones, estadísticas, análisis y estudio para alcanzar un mayor y detallado conocimiento de la situación del sistema y sector, para mejorar, planear y consolidar las políticas públicas en la materia.
- d)** Ejecutar acciones de capacitación y educación en todos los niveles educativos de la Provincia, para la formación de ciudadanos aptos para desarrollar empresas sociales.
- e)** Apoyar la organización, la protección y el impulso de los modos tradicionales

solidarios de producción colectiva, de las culturas regionales, populares y autóctonas, cuanto de las demás comunidades y sectores sociales originales y residentes en la Provincia.

- f) Promover la transformación de actividades marginales de la economía informal hacia grupos productivos organizados e incentivar mecanismos que aseguren la igualdad entre los distintos sectores sociales, por lo que se deberá exigir a los organismos del sector social, mayores requisitos y condiciones que los exigidos a otras entidades económicas para el concurso u otorgamiento de créditos o cualquier otro contrato sobre bienes o servicios con la Administración Pública Provincial y Municipal.
- g) Efectivizar por parte del Estado Provincial el reconocimiento a las cooperativas como una forma de organización social, fundada en un sistema de propiedad social de los medios de producción, distribución y consumo, integrada por personas físicas, basadas en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, para realizar todo tipo de actividad lícita, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y sociales, sin fines de lucro.
- h) Incluir en la políticas de Estado las cooperativas como organismos de utilidad pública, dentro del marco de organizaciones sociales para el trabajo, el bienestar de la sociedad y el bien común con sujeción al fin social que establecen la leyes vigentes provinciales y nacionales en la materia.-

ARTÍCULO 3°.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley será el Ministerio de Producción y Desarrollo Local de la Provincia, Dirección de Desarrollo Organizativo, o autoridad que en el futuro pudiere reemplazarlo, quien deberá velar por el eficaz cumplimiento de los postulados establecidos en la presente.-

ARTÍCULO 4°.- La Función Ejecutiva destinará anualmente una partida presupuestaria al Ministerio de Producción y Desarrollo Local con imputación a la Dirección de Desarrollo Organizativo, a los fines establecidos en la presente Ley, cuyo monto en ningún caso será inferior al aporte que realiza el Estado Nacional por imperio de la Ley N° 23.427 o en su defecto, a otros recursos específicos que reciba la Provincia para el sector cooperativo.-

ARTÍCULO 5°.- Facúltase a la Función Ejecutiva a crear, en su caso, un Órgano de Administración Financiera que tendrá competencia respecto de los fondos o recursos propios o mixtos que se imputan para el fomento cooperativo con el propósito de realizar las inversiones necesarias que determine la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, a los fines de impulsar y promover el desarrollo cooperativo.-

ARTÍCULO 6°.- El Organismo referido en el Artículo anterior, en consecuencia, podrá:

- a) Financiar a tasa diferenciada proyectos que cuentan con la aprobación de la Dirección de Desarrollo Organizativo.
- b) Avalar y garantizar ante entidades financieras públicas o privadas, provinciales, nacionales e internacionales, créditos destinados al desarrollo y ejecución de aquellos proyectos productivos que cuenten con la debida aprobación de la Dirección de Economía Social.-

ARTÍCULO 7°.- La asignación y distribución de recursos, bienes y servicios a las organizaciones cooperativas que otorgue el Estado Provincial a través de sus organismos centralizados, descentralizados o autárquicos, serán técnicamente determinadas por la Dirección de Desarrollo Organizativa.-

ARTÍCULO 8°.- El Estado, Provincial en relación a los proveedores del Estado y registro de contratista, otorgará prioridad en la adquisición y contratación de bienes y servicios a las organizaciones cooperativas, que en la producción, calidad y cantidad de aquellos cumplimenten con todos los requisitos legales exigidos por las normas vigentes, cuanto con pautas económicas de competitividad en el mercado. El Estado Provincial adoptará todas las medidas conducentes para incentivar al sector.-

ARTÍCULO 9°.- La Dirección de Desarrollo Organizativo coordinará con todas las demás áreas del Estado Provincial, en especial con la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo, la inclusión, integración y participación de las organizaciones cooperativas con el fin de satisfacer necesidades vinculadas con la adquisición de insumos, bienes, realización de obras y prestación de servicios, nuevos o en vía de ejecución. A estos fines, deberá requerir a los organismos de planificación de las respectivas reparticiones, las demandas en tales conceptos.-

ARTÍCULO 10°.- El Estado Provincial apoyará técnica y financieramente a las cooperativas educacionales que se crearen y que se especialicen en educación cooperativa, con cumplimiento de las pautas, exigencias, normas legales y requisitos básicos cuya aplicación compete al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Igualmente planificará a partir del Ciclo Lectivo siguiente al que entrare en vigencia la presente Ley, la enseñanza cooperativa en los establecimientos educativos públicos provinciales en todos los niveles. Tal planificación deberá incluir la creación y funcionamiento de las cooperativas escolares y juveniles. Podrá celebrar convenios con Universidades e Institutos Superiores de Educación a efectos de la investigación, producción, desarrollo y mejoramiento de las organizaciones cooperativas.-

ARTÍCULO 11°.- La Dirección de Desarrollo Organizativo creará un organismo consultivo de asesoramiento y de evaluación permanente del desarrollo del sector cooperativo, que en su integración deberá incluir la participación de representantes del sector de cooperativas federadas y no federadas. Además participará en el asesoramiento y evaluación previos a las resoluciones que la Dirección de Desarrollo Organizativo adoptare respecto de la aprobación de proyectos cooperativos.-

ARTÍCULO 12°.- Las Organizaciones Cooperativas serán inicialmente, al momento de su creación, asistidas por el Estado Provincial a efectos que cumplimenten para su habilitación con los beneficios de previsión social que incluirá: obra social, seguros sobre riesgos, accidentes y enfermedades para las trabajadoras que en ellas se desempeñen en relación de dependencia, como así también obra social y seguros del trabajos para sus socios y trabajadores autónomos que igualmente en ellas laboraren. Deberán cumplimentar con los aportes previsionales atinentes al régimen de trabajadores autónomos, salvo para aquellos trabajadores que se desempeñaren en ellas en relación de dependencia. A efectos de la presente Ley queda prohibidos a los socios de las organizaciones cooperativas, celebrar con los mismos contratos de trabajo en relación de dependencia.-

ARTÍCULO 13°.- Créase el Fondo Provincial Cooperativo, que estará integrado por todos aquellos otros aportes no previstos en la presente Ley, que se efectuaren para cumplir con los objetivos de esta Ley, en los que quedarán incluidos los montos que arroje el deducido que en concepto de impuesto a los ingresos brutos, aporten las organizaciones cooperativas al Estado Provincial.-

ARTÍCULO 14°.- Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente, serán imputadas a las partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Producción y Desarrollo Local.-

ARTÍCULO 15°.- Los términos de la presente Ley serán aplicables en cuanto fuere pertinente, a las organizaciones mutuales a crearse y a las radicadas y en funcionamiento en el ámbito de la provincia de La Rioja.-

ARTÍCULO 16°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, en La Rioja, 125º Período Legislativo, a dos días del mes de diciembre del año dos mil diez. Proyecto presentado por el diputado **DÉLFOR AUGUSTO BRIZUELA.-**

2.4.MENDOZA

Ley 8.435

LEY Nº 8.435

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, sancionan con fuerza de L E Y:

Artículo 1º - Créase el Programa de Promoción de la Economía Social y Solidaria de la Provincia de Mendoza, que tendrá los siguientes objetivos:

- a) Diseñar una Planificación Estratégica Participativa a corto, mediano y largo plazo tendiente a la construcción de una política pública integrada y articulada de la Economía Social y Solidaria en todo el territorio de la Provincia de Mendoza.
- b) Implementar planes de Educación, capacitación y asesoramiento destinados a mejorar los procesos de organización, de producción y comercialización de sus productos y a transmitir e incorporar los principios y valores de la Economía Social y Solidaria en la sociedad mendocina.
- c) Proponer y ejecutar un sistema de cuantificación de los sujetos de la Economía Social y Solidaria, a través de la articulación con otros organismos provinciales y nacionales; y la implementación de un régimen diferencial de impuestos, tasas y contribuciones de orden provincial así como de una gestión eficaz en inscripciones correspondiente a diversos productos y/o servicios.
- d) Favorecer los procesos Productivos de las personas y organizaciones que desarrollen actividades dentro del marco de la Economía Social y Solidaria a través de una política de subsidios y financiamiento de sus actividades.
- e) Promover acciones concretas referidas a fortalecer el circuito de la Comercialización e Intercambio para permitir darle sustentabilidad y sostenibilidad incorporando mecanismos de involucramiento social.

Artículo 2º - A los fines de la presente Ley se entiende por Economía Social y Solidaria (E.S.y S.) al conjunto de recursos y actividades, y grupos, instituciones y organizaciones, que operan según principios de solidaridad, cooperación y autoridad legítima, en la incorporación y disposición de recursos para la realización de actividades de producción, distribución, circulación, financiamiento y consumo digno y responsable; cuyo sentido no es el lucro sin límites sino la resolución de las necesidades de los trabajadores, sus familias y comunidades, y del medio ambiente; para lograr una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria.

Artículo 3º - Son sujetos de la Economía Social y Solidaria quienes poseen una gestión democrática y participativa, una organización económicamente equitativa, con justa distribución de los recursos, ingresos y beneficios; y realizan actividades que no sólo incluyen la producción, consumo o venta de bienes y servicios sino también la humanización de las relaciones sociales. Entre ellos se cuentan:

- a) Personas jurídicas como Cooperativas, Mutuales, Asociaciones Civiles, Organizaciones Vecinales, Organizaciones de microcrédito, Organizaciones campesinas, Organizaciones de agricultura familiar, Empresas recuperadas, Comercializadoras solidarias, Organizaciones Solidarias, Organizaciones indígenas.
- b) Grupos asociativos legitimados como Ferias Populares, Clubes del Trueque, Centros de Estudios e Investigaciones.
- c) Personas físicas como Microemprendedores vinculados y Efectores de desarrollo local y economía social.

Artículo 4º - Confórmese el Fondo Especial de Promoción para el cumplimiento y ejecución del Programa de Promoción de la Economía Social y Solidaria de la presente Ley que se constituirá con los siguientes recursos:

- a) Recursos del presupuesto de la provincia, que ascenderán a Pesos cinco millones (\$ 5.000.000) ajustables, autorizando las correspondientes partidas presupuestarias para garantizar su ejecución a partir del año 2.013. La reglamentación deberá prever el modo en que se deberá administrar dicho Fondo.
- b) Recursos provenientes de organismos nacionales o internacionales, tanto del sector público como del privado.

El ochenta y cinco por ciento (85%) del Fondo Especial de Promoción previsto en el inciso a), deberá destinarse a subsidios y microcréditos productivos.

El quince por ciento (15%) restante se aplicará al cumplimiento de los fines establecidos en la presente Ley.

Artículo 5º - El órgano de aplicación de la presente Ley será el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de la Provincia de Mendoza, o la dependencia que éste determine.

Artículo 6º - Créase en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos el Consejo Provincial de Economía Social y Solidaria, que tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Impulsar una Planificación participativa y estratégica junto con los diversos actores de la Economía Social y Solidaria.
- b) Registrar a las Unidades de la Economía Social y Solidaria que soliciten su incorporación en el régimen de Promoción, comprendidas en los límites que se establezcan.
- c) Organizar y realizar estudios e investigaciones de carácter jurídico, económico, contable, organizativo y social sobre la materia de su competencia; para lo cual podrá emprender cursos, conferencias, congresos y/o publicaciones.
- d) Promover la actualización permanente y adecuación de la legislación concerniente al sector de la Economía Social y Solidaria.
- e) Promover una política fiscal, tributaria y previsional que procure la formalización y seguridad social de trabajadores-productores, promotores y organizaciones de la Economía Social y Solidaria.
- f) Relevar y sistematizar periódicamente estadísticas e información del sector de la Economía Social y Solidaria.
- g) Transmitir y difundir los principios y valores de la economía social y solidaria en los sistemas formales y no formales de la educación.

Artículo 7º - El Consejo se integrará con tres (3) miembros representantes de organizaciones de la Economía Social y Solidaria, un (1) miembro del sector académico, quienes actuarán ad honórem, y tres (3) funcionarios ministeriales cuyas funciones estén vinculadas a la actuación económica y social de la Provincia. Será dirigido y representado por un Presidente designado entre sus miembros y de acuerdo a lo que disponga la reglamentación; como así mismo deberán prever los recursos necesarios para su funcionamiento dentro del marco de la presente norma.

Artículo 8º - El Consejo organizará un Registro Provincial de las Unidades de la Economía Social y Solidaria comprendidas en los límites que se dispongan reglamentariamente, para su incorporación en el régimen de Promoción. Este Registro se articulará con el Registro de la Agricultura Familiar ya existente. La reglamentación deberá respetar, entre los requisitos a cumplirse para integrar dicho Registro, la efectiva actuación conforme a los principios de la Economía Social y Solidaria.

Artículo 9º - El Consejo promocionará la flexibilización y adaptación de las condiciones normativas municipales atinentes a la promoción de la Economía Social y Solidaria y la correspondiente adhesión de las intendencias a la presente norma.

Artículo 10º - El Consejo promoverá la incorporación en la currícula educativa provincial de todos los niveles de la Provincia, de los principios y valores de la Economía Social y Solidaria, así como fortalecerá los Centros Educativos de Gestión Social para profundizar dicha temática.

Artículo 11º - El Consejo será asesorado en sus funciones por un Comité Asesor Permanente ad honórem, integrado por representantes de Areas Gubernamentales de Desarrollo Social y Derechos Humanos, de Agroindustria y Tecnología y de la Dirección General de Escuelas, representantes de cada uno de los Municipios de la Provincia, representantes de Redes, de Foros y de organizaciones de segundo y tercer nivel, los que serán seleccionados por procedimientos a establecer en la reglamentación respectiva. Asimismo, se podrá invitar a la Delegación Mendoza de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

Artículo 12º - Serán atribuciones del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos o la dependencia que éste determine, las siguientes:

- a) Capacitar, asistir y asesorar técnicamente en materia de formulación de proyectos de negocios; gerenciamiento administrativo, comercial y productivo; capital humano, procesos grupales y asociativos; mejora continua de productos y servicios; y toda otra materia que demanden los beneficiarios del Régimen de Promoción.
- b) Asesorar, informar y vincular en materia de procesos productivos.
- c) Asistir financieramente con fondos propios o por vinculación con otros organismos, a proyectos sustentables.
- d) Promover la Asociación e integración de productores y consumidores en condiciones o riesgos de exclusión económica, social y cultural.

- e) Impulsar la promoción de artesanos, emprendedores y productores autogestivos, así como la organización e integración de los mismos.
- f) Evaluar y monitorear proyectos socio productivos, viable para su financiamiento.
- g) Organizar eventos para la Promoción del sector de la Economía Social y Solidaria tales como Rondas de Negocios, Ferias y Exposiciones.
- h) Promover la creación de centros de producción y comercialización para productores de la Economía Social y Solidaria.
- i) Promover Marcas Colectivas para la comercialización de productos de origen en la Economía Social y Solidaria.
- j) Coordinar y vincular su acción con los entes públicos y privados, educativos – productivos y financieros a fin de promover la Economía Social y Solidaria.
- k) Controlar y auditar sobre los fines y usos de los beneficios financieros y fiscales que se otorguen a los sujetos de la Economía Social y Solidaria.

Artículo 13º - El Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de la Provincia de Mendoza o la dependencia que éste determine, elaborará, coordinará y ejecutará un Plan de Acción Anual, el que deberá ser difundido en los medios de comunicación.

Artículo 14º - En la Ley de Presupuesto de la Provincia se preverán anualmente beneficios tendientes a promocionar a las unidades inscriptas en el Registro de la Economía Social y Solidaria, como exenciones impositivas, exenciones o disminuciones de alícuotas en aranceles de organismos provinciales habilitantes, beneficios en el pago de impuestos de Ingresos Brutos o de Sellos, incluyendo el beneficio previsto por el Art. 5 de la Ley 7.659.

Artículo 15º - El Gobierno de Mendoza promoverá una política de "Compre del Estado" en las distintas reparticiones para la provisión de bienes y servicios que priorice a los inscriptos en el Registro Provincial de Unidades de la Economía Social y Solidaria, hasta un diez por ciento (10%) de las adquisiciones del Estado.

Artículo 16º - Invítase a los Municipios de la Provincia de Mendoza a adherir a la presente Ley.

Artículo 17º - La presente Ley entrará en vigencia a los treinta (30) días contados desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. En un plazo de sesenta (60) días contados desde su entrada en vigencia, el Poder Ejecutivo deberá designar el Consejo respectivo y reglamentar la presente Ley, garantizando su inmediata aplicación.

Artículo 18º - Cada seis (6) meses el Consejo remitirá a las Comisiones de Desarrollo Social y de Hacienda y Presupuesto de ambas Cámaras Legislativas un informe sobre los subsidios y créditos otorgados y la distribución territorial de los mismos.

Artículo 19º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil doce.

2.5.MISIONES

• LEY III Nº 10 (DECRETO Nº 916) - FERIAS FRANCAS

Objetivo: Desarrollo, Promoción y Fomento de la Zona Franca y Mercado Zonal Concentrador de Ferias Francas de la Provincia. Establece como autoridad de aplicación al Ministerio del Agro y la producción, cuyas funciones son fijar mecanismos de control, políticas de promoción y protección de los pequeños y medianos productores, llevar el Registro Provincial de la Ferias Francas, entre otras. Fija organización interna de la Asociación de feriantes.

LEY III - Nº 10

Desarrollo, Promoción y Fomento de la Feria Franca y Mercado Zonal Concentrador de Ferias Francas de la Provincia

Capítulo I Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1.- Institúyese el “Marco Regulatorio de las Ferias Francas de Productores” y la creación del “Mercado Zonal Concentrador de Ferias Francas de la Provincia”.

ARTÍCULO 2.- Son objetivos de la presente Ley:

- a) promocionar y facilitar la producción, el consumo y la comercialización de los productos provenientes de las Ferias Francas de la Provincia;
- b) incentivar la producción natural, agroecológica, saludable, en función al compromiso de los productores con los consumidores y el cuidado del medio ambiente;
- c) conformar y fortalecer una red provincial de organizaciones de productores feriantes que comprenda la cadena desde la elaboración hasta la comercialización final en el Mercado Zonal Concentrador de Ferias Francas de la Provincia;
- d) contribuir al financiamiento de las actividades productivas en la Provincia, instrumentando programas tendientes a solventar los costos de producción;
- e) alcanzar de modo sostenido en un corto plazo el autoabastecimiento en la Provincia;
- f) fomentar el consumo interno y, asimismo, la exportación de los productos provenientes de las Ferias Francas;
- g) impulsar la investigación, producción y transferencia de tecnologías apropiadas al pequeño productor a fin de lograr mayor productividad y agregación de valor.

Capítulo II
Feria Franca

ARTÍCULO 3.- A los efectos de la presente Ley, se considera:

- a) Feria Franca: al conjunto de puestos móviles o fijos que funcionan en espacios públicos o privados cedidos por la Provincia, Municipios y/o particulares, destinados exclusivamente a la venta minorista de productos alimenticios, frutihortícolas, de granja, panificados, regionales y productos elaborados artesanalmente de los pequeños y medianos productores, constituidos en simples asociaciones y con autorización municipal;
- b) Feriantes: a los productores, especialmente los pequeños productores familiares, que comercializan en forma directa sus productos al consumidor final quedando así expresamente excluidos los intermediarios.

Capítulo III
Autoridad de Aplicación

ARTÍCULO 4.- Es Autoridad de Aplicación de la presente Ley el Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia.

ARTÍCULO 5.- Son funciones de la Autoridad de Aplicación:

- a) coordinar y colaborar con los Municipios en la elaboración de normas bromatológicas y de calidad e higiene de los productos comercializados y sobre los mecanismos para su fiscalización;
- b) fijar disposiciones reglamentarias específicas con facultades disciplinarias, sin perjuicio de las atribuciones normativas que tengan los Municipios;
- c) ejecutar y actualizar los “Programas Provinciales de Producción Alimentaria” destinados al sector productivo;
- d) coordinar e impulsar políticas de promoción y protección de los medianos y pequeños productores, a fin de generar mayor volumen en su producción manteniendo la calidad y la continuidad de la actividad;
- e) llevar el Registro Provincial de las Ferias Francas;
- f) realizar monitoreos en términos productivos, administrativos y de comercialización. Asimismo, seguimiento en organizaciones de feriantes de primero, segundo o tercer grado;
- g) recepcionar denuncias formuladas por los feriantes, con el objeto de garantizar el normal funcionamiento de las Ferias Francas;
- h) establecer periódicamente, en coordinación con los Municipios, un rango de precios entre un mínimo y un máximo de los productos ofrecidos, teniendo en cuenta el carácter social y de fomento de las Ferias Francas como además las condiciones del mercado;
- i) capacitar en asuntos administrativos contables a fin de obtener registro de los costos en la cadena de producción, comercialización, destino, volumen y montos;
- j) promover la formación y fortalecimiento de organismos de segundo y tercer grado, para efficientizar la formulación de políticas referidas a las cuencas productoras.

Capítulo IV
Registro Provincial de Ferias Francas

ARTÍCULO 6.- Créase el Registro Provincial de Ferias Francas en el ámbito de la Autoridad de Aplicación, donde deben inscribirse todas las Ferias Francas que funcionan en la Provincia. La inscripción en el Registro es requisito obligatorio, para percibir los beneficios, apoyo, asesoramiento y asistencia técnica que otorgue el Estado Provincial al sector. El procedimiento y recaudos para la inscripción serán establecidos por vía reglamentaria.

ARTÍCULO 7.- La Feria Franca al conformarse por primera vez, estará representada por una Comisión Directiva provisoria, elegida por simple mayoría entre los mismos productores que la integran y tendrá a su cargo la obligación de constituirse en una asociación civil en los términos del Artículo 46 del Código Civil, confeccionar su estatuto, reglamento interno y remitir copia certificada de todo lo actuado con la solicitud formal de inscripción a la Autoridad de Aplicación.

Capítulo V Organización interna

ARTÍCULO 8.- La Comisión Directiva es el órgano encargado de dirigir, administrar y realizar todas las gestiones inherentes al funcionamiento de la asociación de feriantes ante la Autoridad de Aplicación y el Municipio donde se constituya.

ARTÍCULO 9.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, la Comisión Directiva que se encuentre en etapa de formación con conocimiento de la Autoridad de Aplicación, podrá solicitar habilitación para funcionar ante el respectivo Municipio de conformidad a las disposiciones municipales del lugar.

La Autoridad de Aplicación otorgará un plazo de treinta (30) días hábiles, el que podrá ser prorrogado por razones fundadas a petición de los interesados, a los efectos de cumplimentar con toda la documentación exigida por la presente a los fines de su inscripción.

ARTÍCULO 10.- La Autoridad de Aplicación en coordinación con los Municipios, garantizará la vigilancia y seguridad del ámbito ferial y sus alrededores durante los días y horas de funcionamiento, brindando tranquilidad a los feriantes y público en general.

Capítulo VI Mercado Zonal Concentrador de Ferias Francas de la Provincia

ARTÍCULO 11.- Créase el Mercado Zonal Concentrador de las Ferias Francas de la Provincia de Misiones destinado primordialmente a conformar, desarrollar y fortalecer una red de feriantes inscriptos en el Registro Provincial de Ferias Francas y agentes misioneros involucrados en la cadena que se extiende desde la elaboración hasta la comercialización final de productos alimenticios obtenidos en la Provincia de Misiones.

ARTÍCULO 12.- Son objetivos del Mercado Zonal Concentrador de Ferias Francas de la Provincia:

- a) conformar una red de feriantes en el ámbito provincial;
- b) promocionar, fomentar y diseñar estrategias de difusión aplicadas a la comercialización y consumo de productos elaborados por los feriantes en la Provincia;
- c) organizar ferias, exposiciones, conferencias, jornadas y toda otra actividad que permita cumplir con el objetivo de difundir, capacitar y concientizar a la población sobre el beneficio del consumo de los productos de las Ferias Francas;
- d) proponer acciones y políticas para incentivar al feriante o asociación que lo agrupe en la comercialización de sus productos a menor y gran escala;
- e) eliminar la intermediación entre el productor y consumidor final;
- f) brindar apoyo técnico y asistencia necesaria para diversificar y ampliar las áreas de cultivo;
- g) reducir precios de los productos a comercializar, incentivando el consumo de mayoristas y minoristas;
- h) instaurar un sistema de acopio y fletes con cámaras de frío, que conserven los productos desde su origen cualquiera sea el punto de la Provincia hasta su llegada al destino de comercialización;
- i) disponer de los mecanismos necesarios para implementar la comercialización nacional e internacional de los productos provenientes de las Ferias Francas.

ARTÍCULO 13.- La Autoridad de Aplicación, elaborará y aprobará en el plazo de noventa (90) días, un programa de acción en base a un estudio de la realidad de los feriantes misioneros, el que contará con metas estratégicas a corto, mediano y largo plazo,

determinando concretamente las acciones y el financiamiento que se prevé con los excedentes de la mayor recaudación de Rentas Generales de la Provincia.

ARTÍCULO 14.- El Programa de acción mínimamente debe contener un diagnóstico sobre la situación de los productores feriantes en la Provincia, evaluación de las técnicas y variedad de producción ya existentes, valoración de demandas y oportunidades del mercado priorizadas en base a las necesidades de la economía provincial, nacional e internacional.

ARTÍCULO 15.- El Mercado Zonal Concentrador de Ferias Francas de la Provincia, tiene su asiento físico en el inmueble determinado según título como: Lotes 01 al 14 de la Manzana L, Chacra 100 del Municipio de Posadas, Departamento Capital, Provincia de Misiones; Nomenclatura Catastral: Dpto. 04 – Mun. 59 - Secc. 16 - Chac. 100 - Manz. 12 – Parcelas 01 al 14, respectivamente.

Capítulo VII Recursos

ARTÍCULO 16.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley provendrán de:

- a) partidas que anualmente le asigne el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial;
- b) donaciones y legados;
- c) aportes de organismos nacionales o internacionales, provinciales o municipales; públicos o privados.

ARTÍCULO 17.- Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias para el cumplimiento de la presente Ley.

Capítulo VIII Disposiciones Transitorias

ARTÍCULO 18.- Establécese un plazo de ciento veinte (120) días a partir de la reglamentación de esta Ley, a efectos de que las Ferias Francas de productores ya existentes dentro del territorio de la Provincia, se registren conforme al marco legal establecido en la presente.

ARTÍCULO 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

2.6. NEUQUÉN

• LEY 2.782 (DECRETO N° 2220) FERIAS FRANCAS

Objetivo: Crea Ferias Francas y establece sus objetivos, características, organización y forma de funcionamiento. El objetivo principal de las Ferias Francas es comercializar los productos agropecuarios producidos en la Provincia y sus productos derivados elaborados bajo registro provincial o municipal en forma directa a los consumidores. Crea el registro Único de Feriantes de la provincia del Neuquén.

2.7. RIO NEGRO

LEY 4.499-REGIMEN DE PROMOCION DE LOS MERCADOS PRODUCTIVOS ASOCIATIVOS

Capítulo I

FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LOS MERCADOS PRODUCTIVOS ASOCIATIVOS (artículos 1 al 2)

ARTICULO 1.- Objeto. Se establece el Régimen de Promoción de los Mercados Productivos Asociativos, que tiene por finalidad regular el registro, el funcionamiento y las políticas públicas de promoción de los Mercados Productivos Asociativos, que desarrollen actividades en el marco de la economía social, cuyas

iniciativas basadas en el esfuerzo propio y colectivo, generan bienes y servicios con el fin del autosostenimiento de sus respectivos núcleos familiares o de pertenencia.

ARTICULO 2.- Beneficiarios del Régimen de Promoción. Son beneficiarios del Régimen de Promoción que aquí se dispone, los Mercados Productivos Asociativos, entendiéndose por tales a las organizaciones comunitarias del sector de la economía social, cualquiera fuese la forma asociativa que adopten, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

- a) Se encuentren integradas por los propios productores o sus familiares.
- b) Produzcan bienes y servicios que sean el resultado directo del trabajo personal de sus integrantes, que se elaboren a partir de según las costumbres propias de quienes intervienen en las distintas instancias de su producción y comercialización.
- c) Para el caso en que no cuenten con personería jurídica reconocida, presenten un Reglamento Interno de Funcionamiento vigente del agrupamiento productivo elaborado por consenso de sus integrantes, que recepte los principios éticos de la economía social y del que surja la forma de adopción de las decisiones de la organización y la responsabilidad de sus integrantes y la posibilidad expresa de colaboración solidaria de los productores organizados, cuando alguna situación atendible de un productor de los aquí mencionados, le impida o restrinja la posibilidad de la comercialización en forma directa.
- d) Se encuentren reconocidas e inscriptas en el Registro de Mercados Productivos Asociativos de la Provincia de Río Negro y con la inscripción vigente.

Capítulo II

REGISTRO PROVINCIAL DE MERCADOS PRODUCTIVOS ASOCIATIVOS (artículos 3 al 4)

ARTICULO 3.- Registro Provincial. Creación. Finalidad. Se crea el Registro Provincial de Mercados Productivos Asociativos, que funciona en el ámbito de la Subsecretaría de Economía Social del Ministerio de Producción, en el que deben inscribirse las organizaciones comunitarias del sector de la economía social, que funcionen como Mercados Productivos Asociativos, comprendidas en el régimen de fomento que en esta norma se dispone.

ARTICULO 4.- Funciones. El Registro Provincial de Mercados Productivos Asociativos es el organismo responsable de:

- a) Llevar en forma organizada y actualizada un registro de carácter público de las organizaciones comunitarias inscriptas, reconocidas y habilitadas para funcionar como Mercados Productivos Asociativos, alcanzadas por las disposiciones de la presente norma.
- b) Recepcionar a tal fin, las solicitudes de inscripción en dicho Registro.
- c) Emitir las constancias que hagan a la inscripción.
- d) Controlar el cumplimiento de los requisitos de procedencia del reconocimiento e inscripción y de las condiciones para la vigencia de la misma.
- e) Tramitar solicitudes de suspensiones, bajas, actualizaciones o reinscripciones y disponer lo que corresponda.
- f) Establecer mecanismos ágiles, sencillos y gratuitos para proceder a la inscripción de los Mercados Productivos Asociativos y para la actualización de sus registros, no pudiendo percibir tasa alguna para la realización de los trámites requeridos por las organizaciones comunitarias inscriptas.
- g) Establecer un servicio de asesoría al productor que le brinde la información y el asesoramiento necesario para acceder al régimen de esta Ley y sus beneficios.
- h) Realizar tareas de fiscalización y control del funcionamiento de los Mercados Productivos Asociativos inscriptos, sin que ello implique imponer cargas adicionales de ningún tipo a las organizaciones inscriptas.
- i) Efectuar campañas de difusión de sus funciones y de los beneficios emergentes del presente Régimen.
- j) Registrar acuerdos de integración de Mercados Productivos Asociativos y de formalización de consorcios, alianzas u otros tipos de acciones de complementación, con el fin de ampliar y diversificar la escala económica de los mismos, dentro de los principios éticos de la economía social.

- k) Emitir certificaciones sobre los datos de su registro a terceros solicitantes, pudiendo en este caso establecer tasas retributivas de servicios conforme el Régimen General de la Administración Provincial.
- l) Toda otra acción tendiente al mejor funcionamiento del Registro y de las organizaciones comunitarias en él registradas o con capacidad de hacerlo.

Capítulo III

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LOS MERCADOS PRODUCTIVOS ASOCIATIVOS ACCIONES (artículos 5 al 7)

ARTICULO 5.- Régimen de Promoción. Acciones. El Estado provincial promueve el reconocimiento y funcionamiento de los Mercados Productivos Asociativos registrados como tales, conforme el Régimen aquí dispuesto.

A tal fin, el Poder Ejecutivo por medio de la autoridad de aplicación y de los demás organismos públicos que lo integran, debe:

- a) Implementar programas de capacitación y asesoramiento brindados por sí o por terceros, destinados a mejorar los procesos de organización, de producción y comercialización de sus productos, al mejoramiento de la calidad de lo producido, a la progresiva aplicación de normativas de calidad e higiene y salubridad de productos alimenticios.
- b) Favorecer el acceso de los Mercados Productivos Asociativos al financiamiento de sus actividades y al desarrollo de las mismas, mediante la vinculación de los mismos con entes públicos o privados de orden provincial, nacional, regional o internacional, privilegiando a los Mercados Productivos Asociativos como beneficiarios de los organismos provinciales que otorguen financiamiento o subsidios a la producción.
- c) Desarrollar por medio de sus organismos públicos o por organismos o entidades provinciales, nacionales, regionales e internacionales, políticas de subsidios para llevar adelante el mejoramiento de los circuitos de producción y comercialización, mediante inversiones en capacitación, tecnología, maquinaria y herramientas de uso en las organizaciones colectivas promocionadas, estableciendo las responsabilidades de administración y rendición oportuna de los mismos, conforme lo determine la reglamentación.
- d) Establecer por medio de los organismos públicos pertinentes, tarifas diferenciales en los servicios públicos de energía eléctrica, provisión de agua potable y saneamiento y cualquier otra que en el futuro dependa de jurisdicción provincial, las que en ningún caso podrán ser superiores a las denominadas familiares o a las tarifas de interés social en aquellos servicios en que cuenten con ella.
- e) Gestionar ante las empresas prestadoras de otros servicios públicos domiciliarios de jurisdicción nacional, sus organismos concedentes o entes reguladores, la implementación y aplicación de similares tarifas diferenciales a las que se establezcan por organismos o entes provinciales.
- f) Establecer un régimen diferencial de impuestos, tasas y contribuciones de orden provincial, asimilándolo como mínimo a las cooperativas de trabajo.
- g) Gestionar ante las autoridades nacionales que correspondan, similar tratamiento al establecido en el inciso precedente para con los impuestos, tasas, aportes y contribuciones de la seguridad social.
- h) Brindar asesoramiento técnico y profesional para llevar adelante los beneficios establecidos en los incisos precedentes.
- i) Incorporar como parte de las ofertas turísticas provinciales los Mercados Productivos Asociativos, procurando que se incluya en la publicidad formal y que su existencia y producción se exhiba en foros, ferias y exposiciones en que el Estado provincial participe o financie participación de actores turísticos.
- j) Difundir las actividades y los productos de los Mercados Productivos Asociativos a los efectos de contribuir al conocimiento de las mismas.
- k) Promover que los municipios adhieran al presente régimen legal, estableciendo beneficios similares en el orden local a los Mercados Productivos Asociativos registrados.
- l) Impulsar y coordinar acciones de asociativismo comunitario con organizaciones similares existentes en la provincia, en otras jurisdicciones e incluso en el extranjero.
- m) Celebrar convenios con organismos estatales nacionales, provinciales, municipales y multinacionales para ampliar las actividades de promoción de los Mercados Productivos Asociativos.
- n) Solicitar ante organismos pertinentes el otorgamiento preferencial de becas y estímulos para el perfeccionamiento de los productores asociados en Mercados Productivos Asociativos registrados.

ñ) Realizar estudios e investigaciones orientadas a identificar las dificultades y problemática en el funcionamiento y consolidación de los Mercados Productivos Asociativos como herramientas de gestión de la economía social.

o) Establecer un sistema de gestión asistida para la obtención de las autorizaciones y permisos nacionales, provinciales, municipales y comunales para funcionar, producir y comercializar sus productos.

p) Brindar asesoramiento, capacitación y facilitación de gestiones y trámites en materia de registración de marcas colectivas.

ARTICULO 6.- Difusión por el Registro. El Registro Provincial de Mercados Productivos Asociativos implementa programas continuos de información de los beneficios disponibles para dichas organizaciones comunitarias y sus integrantes registrados, con expresa indicación de las condiciones para acceder a los mismos.

En dicha tarea se privilegia la difusión pública por medios locales de cada lugar en los que existan Mercados Productivos Asociativos registrados y a dichos mercados mediante correspondencia cursada al domicilio inscripto en el Registro.

ARTICULO 7.- Informe anual. La autoridad de aplicación y el Registro Provincial elaborarán en forma conjunta un informe anual de gestión y un plan de acción que comunicarán a los Mercados Productivos Asociativos registrados y difundirán en los medios de comunicación.

Asimismo, es responsabilidad de la autoridad de aplicación, elaborar anualmente con participación de los representantes de los Mercados Productivos Asociativos, el presupuesto correspondiente a la implementación de esta Ley, ello previo a la remisión a los organismos técnicos presupuestarios del Poder Ejecutivo.

Dicho proyecto de presupuesto será, además, comunicado a la Legislatura provincial.

Capítulo IV

DISPOSICIONES PARTICULARES (artículos 8 al 10)

ARTICULO 8.- Procedencia de los bienes comercializados. Los Mercados Productivos Asociativos, deben comercializar productos elaborados por los productores que los integran o pertenecientes a su grupo de pertenencia.

Pueden accesoriamente comercializar productos de origen total o parcial de otras organizaciones comunitarias equivalentes, debiendo en tal caso explicitar notoriamente esa situación.

ARTICULO 9.- Asociaciones de segundo grado. Los Mercados Productivos Asociativos pueden integrar consorcios productivos, de comercialización, alianzas estratégicas u otros tipos de acuerdos de complementación entre sí o con organismos públicos o comunitarios equivalentes, con el fin de ampliar y diversificar su producción y la escala económica de su actividad.

ARTICULO 10.- Autoridad de aplicación. Es autoridad de aplicación de la presente Ley el Ministerio de Producción, por medio del organismo específico que determine. La autoridad de aplicación tiene a su cargo velar por el estricto cumplimiento de esta Ley. Los funcionarios que la incumplan quedan sujetos a las responsabilidades y sanciones previstas normativamente al respecto.

Capítulo V - DISPOSICIONES GENERALES (artículos 11 al 13)

ARTICULO 11.- Fondo Específico. Se crea el Fondo Específico para el cumplimiento de la presente Ley, el que debe operar por medio de una cuenta bancaria única, administrado por la autoridad de aplicación, que se constituye con los siguientes recursos:

a) Recursos que el presupuesto de la provincia le asigne.

b) Recursos provenientes de organismos nacionales o internacionales, tanto del sector público como del privado.

ARTICULO 12.- Invitación a los municipios. Se invita a los municipios a adherir a la presente, a efectos de que desarrollen en el ámbito de sus competencias, acciones de promoción de los Mercados Productivos Asociativos de sus localidades.

ARTICULO 13.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente, garantizando su inmediata aplicación.

FIRMANTES

MENDIOROZ - MEDINA

3. ORDENANZAS MUNICIPALES

3.1. BELLA VISTA (CORRIENTES)

- **ORDENANZA 919/09**

Objetivo: Crear el sistema de garantía participativa de productos agroecológicos, que se desarrollan en el marco de una propuesta de desarrollo ecológicamente sustentable.

3.2. LUIS BELTRÁN (RÍO NEGRO)

- **ORDENANZA 24/10**

Objetivo: Autorización Construcción Natural. Autoriza el método de construcción con tierra cruda, reconociéndolo como ancestral y parte de cultura de los pueblos, así como con virtudes. Establece requisitos con los que debe cumplir.

3.3. MORENO (BUENOS AIRES)

- **ORDENANZA 4.100/09**

Objetivo: Actualiza los preceptos sobre la Economía Social, a raíz de canalizar las experiencias de los microempreendedores.-

3.4. NEUQUÉN (NEUQUÉN)

- **ORDENANZAS 7723/96, 7949/97 y 7950/97**

Objetivo: Se crea la Feria N°1, N°2 y N°3, instrumentar nuevas medidas conducentes a regularizar la venta en la vía pública, propone como alternativa la asignación de un lugar físico donde los vendedores con puestos fijos puedan comercializar organizadamente.

3.5 ROSARIO (SANTA FE)

- **ORDENANZA 7358/02**

Objetivo: Promover la promoción de emprendimientos productivos sociales locales.

- **ORDENANZA 7721/04**

Objetivo: Brindar capacitación y asesoramiento en la organización de sectores informales que trabajen en problemáticas ambientales.

- **ORDENANZA 7844/05**

Objetivo: Se implementa el régimen de “Compre Local”.

- **ORDENANZA 8290/08**

Objetivo: Promover y Fomentar el desarrollo del microcrédito en Instituciones que trabajen en el ámbito de la Economía Social Local.

- **ORDENANZA 8342/08**

Objetivo: Reglamenta la radicación de emprendimientos productivos a baja escala dedicados a la crianza de pequeños animales, dentro de la planta urbana, que se hallen en el marco del Programa Crecer.

- **ORDENANZA 8682/10**

Objetivo: Norma sobre el funcionamiento de las ferias artesanales.

3.6. VICTORIA (ENTRE RÍOS)

- **ORDENANZA 2180/03**

Objetivo: El objetivo es incorporar al circuito económico todas aquellas personas capaces de generar micro-emprendimientos, con ayuda crediticia.

4. LEGISLACION EXTRANJERA

4.1. ANTIGUA Y BARBUDA

THE CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 2010 No. 9 of 2010

[Printed in the Official Gazette Vol. XXX No. 63 dated 11th November, 2010.]

Printed at the Government Printing Office, Antigua and Barbuda, by Paget Terry Acting, Government Printer — By Authority, 2010.

THE CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 2010

ARRANGEMENT

Sections

1. Short title.
2. Interpretation.
3. Co-operative principles.

PART II

REGISTRATION OF CO-OPERATIVE SOCIETIES

4. Requirement for registration.
5. Supervisor.
6. Register.
7. Supervisor's regulatory powers.
8. Power to issue guidelines.
9. Certificate of Supervisor.
10. Power to refuse documents.
11. Verification of documents.
12. Application for registration.
13. Content of and amendment to bye-laws.
14. Effect of bye-laws.
15. Conditions for registration.
16. Registration of co-operative societies.
17. Effect of certificate of registration.
18. Capacity as body corporate.
19. Prohibition on carry on business contrary to bye-laws and law.
20. Registered office.
21. Maintenance of mandatory records.
22. Inspection and access to records.
23. Suspension and cancellation of registration.
24. Seal.
25. Pre-registration contracts.

PART III

MEMBERSHIP AND MEETINGS

26. Application and qualification for, and limitations on, membership.
27. Joint accounts.
28. Membership fees and membership register.
The Co-operative Societies Act, 2010. 4 No. 9 of 2010
29. Liability of past and present members.
30. Withdrawal of membership.
31. Termination of membership by Board.
32. Termination of membership by members.
33. Suspension of membership.
34. Appeal.
35. Re-admittance.
36. Voting rights of member who is not an individual.
37. Representatives of member who is not an individual.
38. Voting procedure.
39. Place of meetings.
40. Members not to exercise rights until due payment.
41. First general meeting.

42. Annual general meetings.
43. Special general meeting.
44. Meeting called by Supervisor.
45. Resolution in lieu of meeting.
46. Notice of meetings.
47. Fixing of record date.
48. Quorum.
49. Delegates.
50. Notice of motion.
51. Power to make bye-laws.
52. Effective date of bye-laws

PART IV

MANAGEMENT

53. Board of directors and Committees.
54. Officers.
55. Provisional directors and elected directors.
56. Powers of Board.
57. Committees generally.
58. Tenure of committees generally.
59. Credit committee.
60. Duties of credit committee.
61. Approval of loans.
62. Credit committee reports.
63. Removal of members of credit committee.
64. Removal of members of credit committee by Board.
65. Supervisory and compliance committee.
66. Duties, functions and powers of supervisory and compliance committee.
No. 9 of 2010 5 The Co-operative Societies Act, 2010.
67. Compliance officers.
68. Misappropriation and other contraventions of the Act.
69. Meetings of the supervisory and compliance committee.
70. Removal of member of supervisory and compliance committee.
71. Removal of member of supervisory and compliance committee by the committee.
72. Election of directors.
73. Tenure of directors.
74. Additional powers of Board.
75. Validity of acts of directors and officers.
76. Indemnification of directors and officers.
77. Duty of care of directors and officers.
78. Ambit of duty.
79. Liability of directors.
80. Misuse of confidential information.
81. Declaration of interests.
82. Disclosure of interests at meetings.
83. Pecuniary interests for the purposes of section 82.
84. Removal or exclusion of disability.
85. Meetings of directors generally.
86. Meetings by telephone, etc.
87. Attendance at meetings.
88. Organisational meeting of directors.
89. Director ceasing to hold office.
90. Removal of directors.
91. Notice of change of directors.
92. Declaration by directors and officers
93. Bonding.
94. Remuneration of directors.
95. Remuneration of officers and employees.

PART V

FINANCING

96. Shares.
97. Share capital.

- 98. Issue of shares.
- 99. Alteration of authorised capital.
- 100. Limitation on purchase of shares.
- 101. Transfer of shares generally.
- 102. Transfer of shares of member of unsound mind.
- 103. Transfer of share or interest on death of member.
- 104. Restrictions on transfer of shares.
- The Co-operative Societies Act, 2010. 6 No. 9 of 2010*
- 105. Conditions for the validity of transfer of shares.
- 106. Power of nomination.

PART VI

BUSINESS OF CO-OPERATIVE SOCIETY

- 107. Marketing of produce through the co-operative society.
- 108. Creation of charge in favour of a co-operative society.
- 109. Execution and registration of charge.
- 110. Claims unaffected by charge.
- 111. Prior claims in favour of co-operative society.
- 112. Enforcement of charge.
- 113. Assignment of charge.
- 114. Bond as additional security for charge.
- 115. Lien on shares.
- 116. Deductions applied to loans and shares.
- 117. Purchase of shares.
- 118. Prohibition on purchase of shares.
- 119. Compulsory sale of shares.

PART VII

PROPERTY AND FUNDS OF CO-OPERATIVE SOCIETY

- 120. Investment of funds.
- 121. Loan by credit union.
- 122. Prohibited loans.
- 123. Receipt of loans and deposits.
- 124. Receipt of deposits from minors.
- 125. Allocation of surplus.
- 126. Development fund.
- 127. Pension fund.
- 128. Charitable contributions.
- 129. Dividends or bonus.

PART VIII

FINANCIAL DISCLOSURE AND AUDIT

- 130. Annual financial statement.
- 131. Approval of financial statements.
- 132. Providing financial statements.
- 133. Auditor's qualifications.
- 134. Disqualifying auditor.
- No. 9 of 2010 7 The Co-operative Societies Act, 2010.*
- 135. Appointment of auditor.
- 136. Cessation of office.
- 137. Removal of auditor.
- 138. Filling vacancy of auditor.
- 139. Auditor appointed by Supervisor.
- 140. Auditor's right to notice.
- 141. Required notice.
- 142. Auditor's right to comment.
- 143. Examination by auditor.
- 144. Auditor's right to inspect.
- 145. Error or misstatement.
- 146. Privilege of auditor.
- 147. Annual, monthly and special returns.

PART IX

RECONSTRUCTION OF CO-OPERATIVE SOCIETIES

- 148. Methods of reconstruction.
- 149. Conversion.
- 150. Effect of certificate of registration.
- 151. Amalgamation of co-operative societies.
- 152. Transfer of assets of co-operative societies.
- 153. Claims of objecting creditors.
- 154. Division of co-operative society.
- 155. Effect of registration of new co-operative societies.

PART X

RECEIVERS AND RECEIVER-MANAGERS

- 156. Appointment of receiver or receiver-manager.
- 157. Functions of receiver.
- 158. Functions of receiver-manager.
- 159. Cessation of Board's powers.
- 160. Duty of receiver or receiver-manager.
- 161. Directions by court.
- 162. Directions by Supervisor.
- 163. Required actions of receiver.

PART XI

DISSOLUTION

- 164. Dissolutions by members.
- 165. Notice of dissolution by members.
- 166. Dissolution by Supervisor.
- 167. Dissolution for failure to account for business transacted.
- 168. Dissolution by Court.
- 169. Revival of dissolved co-operative society.
- 170. Appointment of liquidator.
- 171. Commencement of liquidation.
- 172. Cessation of business.
- 173. General provisions respecting liquidators.
- 174. Duties of liquidator.
- 175. Powers of liquidator.
- 176. Limitation on liability of liquidator.
- 177. Costs of liquidation.
- 178. Closure of liquidation.
- 179. Custody of records.
- 180. Remuneration of liquidator.
- 181. Continuation of actions.
- 182. Unknown claimant or members.
- 183. Power of Supervisor to surcharge.
- 184. Appeal against surcharge.
- 185. Application of Part XI.

PART XII

EXAMINATIONS AND INVESTIGATIONS

- 186. Examinations.
- 187. Investigations.
- 188. Investigations by Court.
- 189. Court order.
- 190. Powers of investigator.
- 191. Hearing in camera.
- 192. Incriminating statements.
- 193. Absolute privilege respecting statements.

PART XIII

DISPUTES

- 194. Settlement of disputes.
- 195. Co-operative Societies Appeals Tribunal.
- 196. Case stated on question of law.
- 197. Enforcement of award and recovery of loans.

PART XIV

SPECIALISED CO-OPERATIVE SOCIETIES CREDIT UNIONS

- 198. Functions of Supervisor, immunity, sanctions and corrective action.
- 199. Restrictions.
- 200. Liquid assets.
- 201. Loan loss provisions.
- 202. Loan approval.
- 203. Security for loans.
- 204. Loan limits.
- 205. Reporting loans.
- 206. Interest on loans.
- 207. Acceptance of deposits.
- 208. Credit union and trusts.

CONSUMERS CO-OPERATIVE SOCIETIES AND HOUSING CO-OPERATIVE SOCIETIES

- 209. Restrictions on directorship.
- 210. Relationship with members.
- 211. Bye-laws.
- 212. Amendment of bye-laws.
- 213. No dividend on share capital.
- 214. Right to possession terminated.
- 215. Abandoned goods.

INDUSTRIAL CO-OPERATIVE SOCIETIES

- 216. Membership.
- 217. Bye-laws.
- 218. Restriction on registration.
- 219. Bonus based on labour.
- 220. Employees may not be directors.

PART XV

APEX BODY

- 221. Establishment and constitution of apex body.
- 222. Functions.
- 223. Officers.
- 224. Consultation by Supervisor.

PART XVI

OFFENCES

- 225. Corrupt practices and bribery.
- 226. Falsely obtaining property of co-operative society.
- 227. Failure to comply with Act.
- 228. Dealing in property subject to charge.
- 229. Offences with respect to reports.
- 230. Contravention of Act.
- 231. Use of words “credit union” “co-operative”.
- 232. Court order to comply.
- 233. Limitation.
- 234. Preservation of civil remedy.

PART XVII

MISCELLANEOUS

- 235. Interpretation.
- 236. Execution and filing.
- 237. Waiver of notice.
- 238. Certificate of co-operative society.
- 239. Documents.
- 240. Alteration.
- 241. Rectification and correction.
- 242. Exemption from stamp duty and other taxes.
- 243. Limitation jurisdiction.
- 244. Proof of entry in books and other documents.
- 245. Immunity of Supervisor and staff.
- 246. Abandoned property in credit union.
- 247. Regulations.

PART XVIII

TRANSITIONAL

- 248. Interpretation.
- 249. Existing directors and officers.
- 250. Co-operative societies, etc., registered under the former Act.
- 251. Repeal.

Schedule

SCHEDULE Constitution and Procedure of the Co-operative Societies Appeals Tribunal.

ANTIGUA AND BARBUDA

THE CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 2010

AN ACT to provide for the registration, supervision, governance, operation and management of co-operative societies, the members of which have a common bond of philosophy and socio-economic objectives, and for incidental and connected purposes.
ENACTED by the Parliament of Antigua and Barbuda as follows:

1. Short title

This Act may be cited as the Co-operative Societies Act, 2010 and shall come into operation on a date that the Minister may by Notice publish in the *Gazette*.

2. Interpretation

In this Act

—“amendment”, in relation to bye-laws, includes the making of a new bye-law and the alternation, substitution or revocation of a bye-law; “apex body” means a body established under section 221;

“associate” means—

- (a) immediate relatives of persons including a spouse or children (including step-children) and their spouses, a parent, brother or sister;
- (b) any co-operative society which holds 20% or more of a co-operative society’s shares in accordance with section 100 of this Act;
- (c) any company or co-operative society in which the co-operative society holds twenty per cent or more of shares to which voting rights are attached;
- (d) a member of the Board or a committee, an employee of a co-operative society, or a business partner; or
- (e) any company or co-operative society over which a co-operative society has control; notwithstanding that at the relevant time any of the persons in question, not being individuals, have not yet come into existence or have ceased to exist;

“Board” means the Board of directors or other directing body, by whatever name called, to whom the management of the affairs of a co-operative society is entrusted; “bonus” means a share of the profits of a co-operative society divided among its members in proportion to the volume of business done with the co-operative society by them from which the profits of the co-operative society were derived; “bye-laws” means the registered bye-laws made by a co-operative society under this Act and includes a registered amendment of the bye-laws;

“capital base” means—

- (a) paid up capital being qualifying and equity shares paid up in cash and invested as risk capital by the members and forming a permanent part of the capital of the co-operative society and which are redeemable only upon transfer to another member; and
- (b) institutional capital; less any amount by which that total has become impaired by operating or other losses;

“CARICOM Member State” means a Member State of the Caribbean Community established by the Revised Treaty of Chaguaramas signed at Nassau, The Bahamas on 5 July 2001;

“central co-operative society” means a co-operative society whose membership comprises cooperative societies providing technical and other services;

“central credit union” means a credit union whose membership comprises principally other credit unions and generally provides liquidity services, deposit facilities and investment opportunities to members;

“Commission” means Board of the Financial Services Regulatory Commission established under Section 316 of the International Business Corporations Act, Cap. 222.

“consumers’ co-operative society” means a co-operative society whose primary purpose is to purchase, procure, process, manufacture, exchange, hire or deal in goods or services for sale at retail to its members who are to be the ultimate users or consumers of those goods and services;

“co-operative society” means a self-help, collectively owned and democratically controlled business enterprise registered under this Act, which consists of a group of people that provides socially desirable and economically beneficial services to its participating members on a joint action and not-for-profit basis;

“credit union” means a co-operative society organised by a group of people with a shared field of membership for provident and productive purposes and providing cooperatively pooled financial services to its members, including savings and lending business;

“delinquent loan” means a loan where a borrower has defaulted on the agreed terms of repayment;

“deposit” means a sum of money paid on terms—

- (a) under which the sum will be repaid, with or without interest or a premium, and either on demand or at a time or in circumstances agreed by or on behalf of the person making the payment and the person receiving it; and
- (b) which are not referable to the provisions of property or services or to the giving of security; and for the purposes of this definition, money is paid on terms which are referable to the provision of property or services or the giving of security if—
 - (i) it is paid by way of advance or part payment for the sale, hire or other provision of property or services of any kind and is repayable only in the event that the property or services is or are not in fact sold, hired or otherwise provided;
 - (ii) it is paid by way of security for payment for the provision of property or services of any kind provided or to be provided by the person by whom or on whose behalf the money is accepted; or
 - (iii) it is paid by way of security for the delivery up or return of any property, whether in a particular state of repair or otherwise;

“deposit guarantee” means an insurance policy or fund that guarantees the return of funds in a credit union against loss in the event that the institution fails;

“director”, means a member of a co-operative who is elected in accordance with section 72;

“dividend” means a share of the surplus of a co-operative society divided among its members in proportion to the equity share capital held by them;

“doubtful loan” means a loan that is twelve or more months in default;

“equity shares” constitutes the common stock or risk capital in addition to qualifying shares purchased by individual and institutional members as their ownership stake in the safety, soundness and competitiveness of their co-operative society;

“Financial Services Regulatory Commission” means the Financial Services Regulatory Commission established under section 316 of the International Business Corporations Act, Cap. 222;

“guidelines” means the guidelines issued under section 8;

“housing charges” means the fee charged by a housing co-operative society to its members to cover the costs of providing housing accommodation;

“housing co-operative society” is a co-operative society that owns real estate and where each shareholder in the society is granted the right to occupy one housing unit.

“housing unit” means housing accommodation intended for individual or family use;

“industrial co-operative society” means a co-operative society whose primary purpose is to operate an enterprise in which its members are the workers necessary for the operation;

“institutional capital” means the aggregate of a co-operative society’s—

(a) statutory or other non-distributable general reserves;

(b) earnings retained after distribution of surplus; and

(c) such other funds which may be received by way of non-refundable donations for no specified purpose which are not available for distribution;

“legal representative” in relation to a co-operative society, member or other person means a person who stands in place of and represents the co-operative society, member or other person and includes a trustee, executor, administrator, assignee, or receiver of the co-operative society, member or other person;

“member” includes a person or co-operative society joining in the application for the registration of a co-operative society, and a person or co-operative society admitted to membership after registration in accordance with this Act and the bye-laws;

“Minister” means the Minister responsible for Finance;

“minor” means an individual under the age of fourteen years;

“officer” includes a president, vice president, secretary, treasurer, director or other person empowered under this Act or bye-laws to give directions in regard to the business of a co-operative society;

“PEARLS” means the International Prudential and Operating Standards and Monitoring System as produced and approved by the World Council of Credit Unions in respect of protection, asset quality, rates of return and costs, liquidity and signs of growth;

“prescribed” means prescribed in the Regulations;

“primary co-operative society” means a co-operative society that is owned by individual members;

“qualifying shares” means the mandatory, non-withdrawable minimum shares to be purchased by an approved applicant to be admitted and to enjoy the full rights and privileges of becoming a member of a co-operative society;

“Register” means the Register to be kept by the Supervisor of Co-operative Societies;

“Regulations” means the Regulations made pursuant to section 247;

“secondary co-operative society” means a co-operative society that is owned by an association of primary co-operative societies;

“security” when issued by a co-operative society—

(a) means a share or a debt obligation of a co-operative society; and

(b) includes a certificate confirming the share or debt obligation;

“security interest” means an interest in or charge on the property of a co-operative society by way of a mortgage, charge, hypothec pledge or other obligation taken by a creditor to secure payment of a debt of the co-operative society;

“special resolution” means a resolution—

(a) at least ten days’ notice of which has been given specifying the intention to propose the resolution as a special resolution, that is passed by a majority of at least three-fourths of the members or delegates of a co-operative society who voted at a general meeting with respect to that resolution; or

(b) at least ten days’ notice of which has been given that is approved by written affirmative vote of at least three-fourths of the members of the co-operative society who—

(i) voted on that resolution within the prescribed time and in the prescribed manner;

(ii) cast a written vote in the manner and within the time specified in the notice; or

(iii) that is consented to in writing by all of the members or delegates of the co-operative society who are entitled to vote at a general meeting on that resolution;

“stabilisation fund” means a facility to provide technical assistance, advice and limited financial assistance to credit unions that are experiencing solvency problems or are insolvent; and “statutory reserves” means the reserves established under section 125;

“Supervisor” means the Supervisor of Co-operatives appointed under Section 5(1);

“tertiary co-operative society” means a co-operative society that is owned by an association of secondary co-operative societies;

“Tribunal” means the Co-operative Societies Appeals Tribunal established under section 195;

3. Co-operative principles

(1) For the purposes of this Act, a co-operative society conforms to co-operative principles if—

(a) each member or delegate, other than in a secondary or tertiary co-operative society, has no more than one vote;

(b) no member or delegate is entitled to vote by proxy;

(c) its membership is open, voluntary and available without any artificial restriction or any unlawful basis of discrimination, to any person who can use its services and is willing to accept the responsibility of membership;

(d) its business is carried on primarily as an economic activity for the benefit of its members;

(e) its primary concerns are its institutional capacity and financial strength, including adequate reserves, retained earnings and internal systems designed to ensure continuous growth and service to members;

(f) it utilises any surplus or savings arising out of its operations—

(i) to strengthen its business;

(ii) to provide or improve common services to its members;

(iii) for the payment of dividends on equity shares purchased by its members;

(iv) for distribution among its members in proportion to the business done by each member with the co-operative society;

(v) to educate its members, employees, directors, committee members and the general public in the principles and techniques of economic and democratic cooperation; and

(vi) for non-profit, charitable, benevolent or cultural purposes;

(g) it pursues co-operation with other co-operative societies;

(h) it provides for continuing education and training; and

(i) it contributes to the social and economic development of its community.

(2) A co-operative society shall conform to the co-operative principles set out in section 3(1).

PART II

REGISTRATION OF CO-OPERATIVE SOCIETIES

4. Requirement for registration

(1) A person shall not carry on the business of a co-operative society unless it is registered in accordance with this Act.

(2) A person who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable on conviction to a fine not exceeding one hundred thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding three years.

5. Supervisor

(1) There shall be a Supervisor of Co-operative Societies who shall be appointed by the Financial Services Regulatory Commission and whose duty shall be to regulate co-operative societies and who shall be responsible for the administration of this Act.

(2) The Supervisor of Co-operatives shall be a person who holds qualifications in the administration of co-operatives, accounting, finance and has had not less than seven years of professional experience in the related field.

(3) The Supervisor shall be assisted by professional and administrative staff, and may delegate duties to any other person or agent under his control as is necessary to enable the Supervisor to perform his regulatory duties and to exercise the powers conferred on the Supervisor under this Act.

(4) The Supervisor shall—

- (a) register all viable co-operative societies;
- (b) inspect and monitor all co-operative societies;
- (c) supervise and regulate all co-operative societies; and
- (d) lead and manage the regulatory process.

6. Register

The Supervisor shall—

(a) in the case of co-operative societies other than credit unions, keep and maintain a register to be known as the “Register of Co-operative Societies” in which shall be recorded the details of all co-operative societies registered under this Part; or

(b) in the case of credit unions, keep and maintain a register to be known as the “Register of Credit Unions” in which shall be recorded the details of all credit unions registered under this Part.

7. Supervisor's regulatory powers

(1) Where—

(a) after an examination of a co-operative society or on the receipt of any information, the Supervisor is of the opinion that the funds of the co-operative society are not being properly managed or protected; or

(b) the Supervisor has reason to believe that a co-operative society is likely to take any action that would affect the financial soundness of the co-operative society, the Supervisor may, after he obtains the approval of the Commission in writing —

(i) by notice in writing, direct the Board within such period as the Supervisor may specify, to cease such action or such practice as the Supervisor may specify or to take such measures as the Supervisor considers necessary to protect the funds of the co-operative society or the interests of the co-operative society's members; and

(ii) place a co-operate society under administrative supervision and appoint a person who, in the Supervisor's opinion and who has been approved by the Commission, has the necessary experience and training to supervise or advise the co-operative society on the action to be taken to remedy the situation.

(2) A person appointed under subsection (1) (b) (ii) shall hold office for a period not exceeding twelve months and on such terms as the Supervisor, with the approval of the Commission, shall specify.

(3) A person appointed under subsection (1) (b) (ii) may be paid such remuneration as the Supervisor with the approval of the Commission, may determine, and such remuneration, and any other expenses of and incidental to the appointment, shall be defrayed out of the funds of the cooperative society.

(4) Notwithstanding sections 23 and 227 of this Act, where it appears to the Supervisor that a requirement in this Act or the bye-laws is being contravened, but the circumstances are not such as to justify the taking of action under section 227 or the suspension of registration under section 23, the Supervisor may give such directives to the co-operative society or person, as seems appropriate.

(5) A director, committee member, employee or agent of a co-operative society shall at all times give all information required by a person appointed under subsection (1) (b) (ii), for the full and satisfactory performance of his duties; and for this purpose section 186 shall apply as if any reference therein to the Supervisor included a reference to a person appointed under subsection (1) (ii).

(6) A person appointed under subsection (1) (b) (ii) shall report to the Supervisor, in such manner and with such frequency as the Supervisor may direct, on the affairs of the co-operative society.

(7) A co-operative society or a person that is required to take any action under this section, may within twenty-one days of the service of the notice by the Supervisor, make representation in writing to the Supervisor as to why the action required should not be taken.

(8) Where the co-operative society fails to comply with the notice referred to in subsection (1)(a)(i), after giving the Board the opportunity to be heard in a general meeting called by the Supervisor for the purpose, the Supervisor may, after obtaining approval from the Commission—

(a) remove from office; or

(b) suspend from office for such period as the Supervisor considers appropriate; all or any of the directors of the co-operative society and direct that the co-operative society be managed by such persons as he may appoint for a period not exceeding fifteen months.

(9) Where a director is suspended under this section, the remaining directors shall be regarded as constituting the Board.

(10) Where all the directors are removed under this section, persons appointed under this section shall exercise all the powers and perform all the functions of a duly constituted Board and shall make arrangements prior to the end of their term of management for the election of a new Board in accordance with the bye-laws of the co-operative society.

8. Power to issue guidelines

(1) The Supervisor may, after consultation with co-operative societies, issue guidelines in respect of—

(a) prudential standards to be observed by co-operative societies to ensure the safety and soundness of the funds of co-operative societies;

(b) the management and investment of the funds of co-operative societies;

(c) the calculation and management of doubtful and delinquent loans;

(d) self insurance arrangements; and

(e) anti-money laundering and combating the financing of terrorism; and in the case of credit unions, the guidelines issued under this subsection shall be consistent with PEARLS.

(2) Where the Supervisor intends to make any substantive modification to the guidelines, the Supervisor shall consult with co-operative societies.

(3) The Supervisor shall—

(a) make the guidelines and all amendments to the guidelines available for inspection by the public; and

(b) on payment of any prescribed fee, provide copies of the guidelines and all amendments thereto to the public.

(4) The Supervisor shall, at such intervals as the Supervisor determines, review any guidelines for the time being in force.

(5) The Supervisor shall publish the guidelines issued under this section and any amendment to the guidelines in the *Gazette*.

9. Certificate of Supervisor

(1) The Supervisor may issue a person with a certificate stating that—

(a) a document required to be sent to the Supervisor has or has not been received by the Supervisor;

(b) a name, whether that of a co-operative society or not, is or is not on the Register; and

(c) a name, whether that of a co-operative society or not, was or was not on the Register on a stated date.

(2) The Supervisor of Co-operatives shall sign a certificate issued under this section.

(3) The signature required under subsection (2) may be printed or mechanically reproduced on the certificate.

(4) A certificate mentioned in subsection (2) is admissible in evidence as conclusive proof of the facts stated in the certificate without proof of the office or signature of the person purporting to have signed the certificate.

10. Power to refuse documents

(1) The Supervisor may refuse to receive, file or register any document that in his opinion—

(a) contains any matter contrary to law;

(b) has not, by reason of any omission or error in description, been properly completed;

(c) does not comply with the requirements of this Act;

(d) contains any error, alteration or erasure;

(e) is not legible; or

(f) is not durable.

(2) The Supervisor may request in respect of a document refused under subsection (1)—

(a) that it be amended or completed and resubmitted; or

(b) that a new document be submitted in its place.

11. Verification of documents

The Supervisor may require that a document or information contained in a document required by this Act to be sent to the Supervisor be verified by affidavit or otherwise.

12. Application for registration

(1) Subject to subsection (2), an application for registration of a co-operative society under this Part shall be submitted to the Supervisor in the prescribed form and in such manner as the Supervisor may determine.

- (2) An application under subsection (1) shall be signed—
- (a) in the case of a co-operative society of which no member is registered as a co-operative society, by at least one-third of the total membership of the co-operative society;
 - (b) in the case of a co-operative society where not all members of the co-operative society are registered co-operative societies, by at least three-quarters of the total membership of the co-operative society; and
 - (c) in the case of a co-operative society where all the members are registered as co-operative societies, on behalf of at least two such co-operative societies.
- (3) An application under subsection (1) shall be accompanied by—
- (a) three copies of the proposed bye-laws of the co-operative society;
 - (b) the prescribed application fee; and
 - (c) such other information in respect of the co-operative society as the Supervisor may require.

13. Content of and amendment to bye-laws

- (1) A co-operative society shall include in its bye-laws provisions—
- (a) respecting its objects, core business, conditions of membership and conditions for nomination as an officer, including—
 - (i) the rights of joint members, if any;
 - (ii) the qualification for membership, the withdrawal of members and the transfer of membership;
 - (iii) the amount of the membership fee and the annual subscription, if any, to be paid by members;
 - (iv) the conditions on which membership ceases or may be terminated, the disposition that may be made on cessation or termination of a member's interest and the determination of the value of the member's interest; and
 - (v) the minimum value of equity shares that may be held by each member;
 - (b) respecting voting rights and the rights of making, amending and repealing bye-laws, the right of a member to vote by ballot and the manner, form and effect of votes at meetings;
 - (c) respecting the quorum for meetings;
 - (d) respecting directors, officers and members of the committees of directors—
 - (i) their qualifications, terms of office and removal;
 - (ii) the filling of vacancies; and
 - (iii) their powers and duties;
 - (e) respecting the address of the co-operative society;
 - (f) respecting the distribution of the property of the co-operative society on dissolution;
 - (g) respecting the borrowing powers of the co-operative society and the procedure for exercising those powers; and
 - (h) respecting any matters, in addition to those set out in paragraphs (a) to (g) that the members may consider necessary or desirable.
- (2) Subject to subsection (3), where the bye-laws require a greater number of votes of directors or members than that required by this Act to effect any action, the bye-laws shall prevail.
- (3) The bye-laws may not require a greater number of votes of members to remove a director than the number required for a special resolution.
- (4) Subject to this Act and the bye-laws, the members of a co-operative society may, at an annual general meeting or a special meeting, amend the bye-laws by special resolution if notice of the proposed amendment together with notice of the meeting—
- (a) by sending the notice by mail to the members, at the addresses given in the register of members; or
 - (b) by publishing the notice in not less than two issues of a newspaper published and circulated in Antigua and Barbuda, or by posting the notice in a place or through a medium of communication that, as stipulated in the bye-laws and in the opinion of the Board, is prominent and accessible to members.
- (5) An amendment to the bye-laws shall be submitted by the co-operative society to the Supervisor for registration in accordance with subsection (6) and no amendment shall be valid until it has been registered.
- (6) An application to register an amendment of the bye-laws shall be accompanied by three copies of the amendment certified to be true copies by the secretary and president of the co-operative society together with a copy of the resolution.
- (7) On being satisfied that an amendment of the bye-laws is not contrary to this Act or the guidelines, the Supervisor shall register the amendment.
- (8) On registration of an amendment of the bye-laws of a co-operative society, the Supervisor shall send to the co-operative society a certified copy of the amendment, which shall be conclusive evidence of the fact that the amendment has been duly registered.
- (9) If the Supervisor refuses to register an amendment—

- (a) the Supervisor shall notify the co-operative society in writing of the refusal, the reasons for the refusal and of the co-operative society's right to appeal under paragraph (b); and
- (b) the co-operative society may, within twenty-one days of the notice of refusal, appeal to the Tribunal.

14. Effect of bye-laws

The bye-laws of a co-operative society when registered bind the co-operative society and its members to the same extent as if they—

- (a) had been signed and sealed by the co-operative society and by every member; and
- (b) contained covenants on the part of each member and the legal representative of each member to observe the bye-laws.

15. Conditions for registration

(1) A co-operative society shall not be registered, or having been registered, shall not continue to be registered under this Part—

- (a) unless its membership consists—
 - (i) in the case of a credit union, of not less than fifty members;
 - (ii) in the case of any other co-operative society, of not less than fifteen members;
- (b) unless it is economically viable and has provision for equity capital expansion and continuous business growth;
- (c) unless there is conformity among its membership with all the co-operative principles as set out in section 3;
- (d) unless the word “Co-operative” or “Credit Union” as the case may be forms part of the name of the co-operative society, and, in the case of a co-operative society registrable under subsection (2), the words “Junior Cooperative” form part of the name of the cooperative society;
- (e) in the case of a co-operative society to be registered with limited liability—
 - (i) unless the word “Limited” is the last word of the name of the co-operative society; and
 - (ii) in the case of a primary co-operative society, unless each member of the primary cooperative society is a shareholder and has one vote in the democratic proceedings of the co-operative society;
- (f) if the name of the co-operative society is identical to that of another co-operative society or so nearly resembles the name of another co-operative society as to be likely to mislead the members of the public as to its identity;
- (g) unless it has and maintains an address in Antigua and Barbuda to which all notices and communications may be sent;
- (h) unless its bye-laws conform to this Act;
- (i) unless it complies with the guidelines issued under section 8;
- (j) unless its policies in respect of shares, loans, deposits and investments are documented and comply with this Act; and
- (k) unless, within sixty days after the issue of the certificate of registration, the co-operative society paints or affixes its registered name in letters that are easily legible in a conspicuous position on the outside of the place where the business of the co-operative society is carried on;
- (l) unless it has commenced business within ninety days of its registration under this Act;
- (m) unless it complies with this Act and its Regulations, the Money Laundering (Prevention) Act and its Regulations and the Prevention of Terrorism Act and its Regulations.

(2) The Supervisor may register as a junior co-operative a co-operative society whose membership consists solely of members of a school, club or cultural organisation who are under the age of fourteen years.

(3) In the determination of the viability of an applicant or existing co-operative society the Supervisor may have regard to—

- (a) the demand for the proposed or current services;
- (b) the capital base of the co-operative society;
- (c) the co-operative society's membership and business size, growth and growth potential; and
- (d) the capacity of the co-operative society to sustain management and audit costs.

(4) A registered cooperative society shall implement suitable measures, procedures and policies to counter money laundering and to combat the financing of terrorism.

(5) Notwithstanding the generality of subsection (4), every registered cooperative society shall, in addition to complying with the provisions of this Act made under this Act, also comply with the following:

- (a) the Money Laundering (Prevention) Act, 1996 No. 9 of 1996 and its Regulations
- (b) the Prevention of Terrorism Act, 2005 No. 12 of 2005 and its Regulations
- (c) the Proceeds of Crime Act, 1993 No. 13 of 1993 and its Regulations
- (d) guidelines issued by the Commission; and

(e) any other relevant legislation promoting good governance, financial accountability and made to safeguard against money laundering and financing of terrorist activity.

16. Registration of co-operative societies

(1) Where the Supervisor is satisfied that an application has been made in accordance with this Act and he receives the approval of the Commission for the registration of the co-operative society, the Supervisor shall, within three months of the receipt of the application, register the co-operative society and its bye-laws and issue the co-operative society with a certificate of registration in the prescribed form.

(2) The name under which a co-operative society is registered under this Act shall be published in the *Gazette* and shall be noted in the Register.

(3) Where the Supervisor refuses to register a co-operative society, the Supervisor shall give the applicant reasons in writing for the refusal.

17. Effect of certificate of registration

(1) Except for a co-operative society that is to be taken to be registered under section 250, a cooperative society comes into existence on the date shown in its certificate of registration.

(2) A certificate of registration issued by the Supervisor to a co-operative society is conclusive proof that the co-operative society named in the certificate is registered under this Act and has complied with all the requirements of registration under this Act.

18. Capacity as body corporate

The registration of a co-operative society renders it a body corporate and, subject to this Act and its bye-laws, it shall have the capacity, rights, powers and privileges of a body corporate.

19. Prohibition on carrying on business contrary to bye-laws and law

A co-operative society shall not—

(a) carry on a business or exercise a power that is restricted or prohibited by its bye-laws or by any law in force in Antigua and Barbuda; or

(b) exercise any of its powers in a manner contrary to its bye-laws.

20. Registered office

(1) A co-operative society shall at all times establish and maintain a registered office and the address of such office shall be specified in the bye-laws.

(2) Subject to subsection (3), the directors of a co-operative society may change the address of the registered office.

(3) A co-operative society shall inform the Supervisor of an intention to change the address of its registered office at least one month prior to the change being made.

21. Maintenance of mandatory records

(1) A co-operative society shall display its certificate of registration at its registered office at all times.

(2) A co-operative society shall make available at all reasonable times at its registered office—

(a) a copy of this Act and the Regulations;

(b) a copy of its bye-laws;

(c) the register of members;

(d) the minutes of all meetings and resolutions of its members;

(e) copies of all notices of directors and notices of change of directors;

(f) a register of its directors setting out the names, addresses and occupations of all persons who are or have been directors of the co-operative society with the dates on which each person became or ceased to be a director;

(g) a copy of every certificate issued to it by the Supervisor;

(h) a copy of every order of the Supervisor relating to the co-operative society;

(i) a copy of the monthly financial statements of the co-operative society;

(j) a copy of the shares transfer register and investment reports; and

(k) the minutes of all meetings and resolutions of its directors and committees.

22. Inspection and access to records

(1) The Supervisor, or persons designated by him in writing, may, during the normal business hours of a co-operative society, observe practices, monitor operations and inspect or authorise the inspection of the co-operative society, including any of the records listed in section 21(2).

(2) Members of a co-operative society, their agents and their legal representatives may, during the normal business hours of the co-operative society, examine any of the records specified in section 21(2)(a) to (h) and the returns specified in section 147.

23. Suspension and cancellation of registration

(1) The Supervisor may, upon the approval of the Commission, by order in writing suspend the registration of a co-operative society for a period not exceeding twelve months if the Supervisor is satisfied that—

- (a) the co-operative society is in breach of any condition of registration;
- (b) the co-operative society is in breach of any requirement of sections 4 or 15;
- (c) the co-operative society or any officer of the co-operative society has failed or refused to comply with any obligation imposed by the bye-laws of the co-operative society, or any requirement of this Act or, the Money Laundering (Prevention) Act, 1996 No. 9 of 1996, the Prevention of Terrorism Act 2005, No. 12 of 2005 and the Proceeds of Crime Act, 1993 No. 13 of 1993;
- (d) the Supervisor has not received from the co-operative society any return notice or other document or fee required by this Act to be sent to him; or
- (e) the co-operative society has failed to comply with any directive given by the Supervisor under sections 7 or 8.

(2) The Supervisor, upon approval of the Commission, may by order in writing cancel the registration of a co-operative society if—

- (a) the co-operative society does not commence business within ninety days of its registration under this Act;
- (b) the number of members has been reduced to less than the number required for the registration of the co-operative society;
- (c) the co-operative society has violated a provision of the laws of Antigua and Barbuda,
- (d) the registration has been obtained by fraud or mistake; or
- (e) the co-operative society has not within a period of suspension under subsection (1) rectified the reason for its suspension.

(3) The Supervisor shall, upon approval by the Commission, by order in writing cancel the registration of a co-operative society if—

- (a) the co-operative society gives notice to the Supervisor that it has ceased to carry on business;
- (b) the co-operative society is dissolved;
- (c) the co-operative society is amalgamated with one or more other co-operative societies or bodies corporate; or
- (d) the co-operative society is bankrupt within the meaning of the Bankruptcy Act, Cap.41, but a co-operative society which includes among its members one or more registered co-operative societies may not have its registration cancelled under paragraph (a).

(4) An order under subsections (1), (2) or (3) shall take effect from the date of the order.

(5) The Supervisor shall not make an order under subsections (1), (2) or (3) until the Supervisor, upon the approval of the Commission has given the co-operative society an opportunity to be heard.

(6) Immediately after the Supervisor has suspended or cancelled the registration of a co-operative society the Supervisor shall publish a notice of the suspension or cancellation in

- (a) the *Gazette*;
- (b) not less than two issues of a newspaper published and circulated in Antigua and Barbuda; and
- (c) any other appropriate medium of communication that, in the opinion of the Supervisor is prominent and accessible to the public.

(7) Where the registration of a co-operative society is cancelled by order under this section or any other section the co-operative society shall, except for the purpose of winding up, cease to exist as a body corporate from the date on which the order takes effect.

24. Seal

(1) The Board may by resolution—

- (a) adopt an official seal;
- (b) change the official seal adopted under paragraph (a); and
- (c) determine which of its directors, officers or agents shall sign instruments to which the official seal is affixed.

(2) An instrument of agreement executed on behalf of a co-operative society by a director, an officer or an agent of the co-operative society is not invalid merely because an official seal is not affixed to it.

25. Pre-registration contracts

(1) Except as provided in this section, a person who enters into a written contract in the name of or on behalf of a co-operative society before it comes into existence is personally bound by the contract and is entitled to the benefits of the contract.

(2) Within a reasonable time after a co-operative society comes into existence, it may, by any action or conduct signifying its intention to be bound thereby, adopt a written contract made in its name or on its behalf, before it came into existence.

(3) Subject to subsection (4) and (5), where a co-operative society adopts a contract under subsection (2)—

(a) the co-operative society is bound by the contract and is entitled to the benefits thereof as if the co-operative society had been in existence at the date of the contract and had been a party to it; and

(b) a person who purported to act in the name of the co-operative society or on its behalf ceases to be bound by or entitled to the benefits of the contract.

(4) Except as provided in subsection (5), whether or not a written contract made before the coming into existence of a co-operative society is adopted by the co-operative society, a party to the contract may apply to a court for an order fixing the obligations under the contract as joint or joint and several, or apportioning liability between or among the co-operative society and a person who purported to act in the name of the co-operative society or on its behalf; and the court may upon the application make any order it thinks fit.

(5) If expressly so provided in a written contract, a person who purported to act for or on behalf of the co-operative society before it came into existence shall not be bound by the contract or entitled to the benefits of the contract.

PART III

MEMBERSHIP AND MEETINGS

26. Application and qualification for, and limitations on, membership

(1) An application for membership of a co-operative society shall be submitted to the Board in such form as the Board may approve.

(2) In order to qualify for the membership of a co-operative society, a person, other than a registered co-operative society

(a) shall be a citizen or resident of Antigua and Barbuda;

(b) shall be a citizen of another CARICOM Member State;

(c) shall not be an undischarged bankrupt;

(d) shall not be of unsound mind; and

(e) except in the case of a junior co-operative, shall be fourteen years of age or over.

(3) Where the co-operative society is a credit union, an individual who is over fourteen years of age but who has not yet attained the age of eighteen years may be admitted as a member and subject to subsection (4) may enjoy all the rights of membership and be subject to all the liabilities of membership.

(4) Where a member referred to in subsection (3) is required to execute any instrument or give any receipt, he may only do so by his parent or guardian.

(5) A member of a co-operative society who has not attained the age of eighteen years may not obtain credit from a co-operative society of which he is a member.

(6) The Board shall cause each applicant for membership to be notified in writing that his application has been approved or disapproved.

(7) Subject to subsection (8), a person may be a member of more than one co-operative society if—

(a) the person has disclosed in his application for membership of a co-operative society the name of any other co-operative society of which the person is a member; and (b) the co-operative societies both have as a primary object the granting of loans to their members and the person has fully disclosed to the first co-operative society that he has applied for membership of the second co-operative society.

(8) A person who is a member of a credit union shall not apply for membership of another credit union unless his application is accompanied by the written consent of the credit union of which he is already a member to his proposed dual membership.

(9) Where a person becomes a member of more than one credit union, the Secretary or Manager of the second or subsequent credit union shall so inform the Supervisor within fourteen days of the grant of membership.

27. Joint accounts

Subject to the bye-laws, where individuals have separate and independent membership in a cooperative society, joint accounts may be held.

28. Membership fees and membership register

(1) A person shall not exercise the rights of membership of a co-operative society unless the person has paid the prescribed membership fee and has satisfied any other requirement which may be specified in the bye-laws.

(2) A co-operative society shall keep a register of members in which shall be recorded—

(a) the names and addresses of its members;

(b) the date on which a person becomes a member and the date, if any, on which the person ceases to be a member; and

(c) such other details as may be prescribed.

29. Liability of past and present members

- (1) Subject to this Act, the liability of a current member of a co-operative society is limited to the unpaid amount of his subscription for shares.
- (2) The liability of a past member or the estate of a deceased member for debts of a co-operative society as they existed on the date on which the member ceased to be a member or died continues for a period of two years after the cessation of membership or death.

30. Withdrawal of membership

- (1) A member of a co-operative society may at any time withdraw from membership of the cooperative society in such a manner as may be prescribed by the bye-laws or the Regulations.
- (2) Withdrawal of membership from a co-operative society shall be by written notice addressed to the Board.
- (3) Withdrawal of membership from a co-operative society shall not affect any existing liability of the member to the co-operative society.

31. Termination of membership by Board

- (1) Subject to the bye-laws, the Board may, by a vote of at least two-thirds of the directors present at a meeting called for the purpose, order the termination of membership of a member of a co-operative society.
- (2) Where the Board terminates the membership of a member under this section—
 - (a) the Board shall—
 - (i) within a period of one year, purchase from the member at par value all shares in the co-operative society held by the member; and
 - (ii) pay to the member all amounts held to the member's credit, together with any interest accrued on those amounts and the amount outstanding on loans made to the co-operative society by the member with any interest accrued on those amounts;
 - (b) the secretary of the co-operative society shall, within ten days from the date on which the order is made, notify the member of the order in writing;
 - (c) the member may appeal from the order to the next general meeting of the co-operative society by giving written notice of his intention to appeal to the secretary within thirty days from the date the member received notice of the order under paragraph (b); and
 - (d) and the member appeals under paragraph (c), a majority or any greater percentage that may be specified in the bye-laws, of the members present at the general meeting shall confirm or rescind the order.
- (3) Where the address of a member the termination of whose membership is ordered under subsection (1) is unknown to the co-operative society after all reasonable efforts have been made to ascertain the member's address for the purpose of making payment to him of all amounts held to his credit, the co-operative society shall transfer those amounts to its statutory reserves.
- (4) Where any amounts are transferred under subsection (3), the co-operative society shall pay those amounts to the person entitled to them on proof of the person's claim that is satisfactory to the co-operative society.
- (5) Where a co-operative society transfers amounts held to the credit of a member under subsection (3), it shall immediately submit to the Supervisor a return showing—
 - (a) the member's name;
 - (b) the member's last known address; and
 - (c) the amounts transferred.

32. Termination of membership by members

Members may terminate the membership of a member where—

- (a) the member has received at least ten days notice of the general meeting at which his membership is to be considered; and
- (b) the termination is approved by a majority of at least two-thirds of the members who—
 - (i) are present at the general meeting; and
 - (ii) cast votes on the resolution.

33. Suspension of membership

Subject to the bye-laws, the Board may by notice in writing suspend a member for a period not exceeding three months if they are satisfied that the member is guilty of misconduct.

34. Appeal

- (1) Subject to subsection (2), where a person's membership is terminated under section 31 or 32, or suspended under section 33, the person may appeal against the termination or suspension to the Supervisor in the prescribed manner and the Supervisor, upon the approval of the Commission, shall confirm or set aside the resolution terminating or suspending the membership.

(2) A person whose membership is terminated for failure to pay fees, assessments, rent or occupancy charges or to fulfil other financial obligations to the co-operative society is not eligible to appeal against the termination of his membership to the Supervisor under subsection (1).

(3) Where a person appeals against the termination of his membership under section 31(2)(c) or this section, notwithstanding the resolution terminating his membership, the person continues to be a member until the termination of his membership is confirmed by the meeting of members under section 31(2)(d) or by the Supervisor under this section.

35. Re-admittance

A person whose membership is terminated under section 31 or 32 may be re-admitted to membership only by a two-thirds majority vote of members present and voting at a general meeting.

36. Voting rights of a member who is not an individual

A co-operative society that is a member of another co-operative society shall exercise its voting rights in that other co-operative society through one of its members duly appointed in that behalf as a delegate under section 49.

37. Representatives of member who is not an individual

(1) Where a co-operative society is a member of another co-operative society, the latter cooperative society shall recognise any individual authorised by a resolution of the directors of the former co-operative society to represent it at meetings of the latter co-operative society.

(2) An individual authorised under subsection (1) may exercise, on behalf of the co-operative society, all the powers of that co-operative society as if it were an individual member.

38. Voting procedure

(1) Subject to the bye-laws, members shall vote—

(a) by a show of hands; or

(b) where the majority of the members entitled to vote at a meeting so demands, by secret ballot.

(2) The chairperson of a meeting has the right to vote, and in the event of a tie he is entitled to a second or casting vote.

(3) Subject to this Act and the bye-laws, a majority of the members who are present and cast votes at a meeting of shall decide all questions.

39. Place of meetings

General meetings of members shall be held in Antigua and Barbuda or, in the case of co-operative societies of a regional or international nature, within the defined geographical area of the co-operative society's lawful operations—

(a) at the place provided in the bye-laws; or

(b) where the bye-laws contain no provision, at the place determined by the Board.

40. Members not to exercise rights until due payment

A member shall not exercise the rights of a member unless the member has made payment to the cooperative society in respect of membership or acquired an interest in the co-operative society as specified in the bye-laws of the co-operative society or as prescribed.

41. First general meeting

(1) This section does not apply to a co-operative society if it is taken to be registered under section 250.

(2) Within two months of the date of its registration, a co-operative society shall hold a general meeting at which all members are entitled to be present and to vote.

(3) Notwithstanding subsection (2), where the Board applies to the Supervisor, the Supervisor may extend the time for holding the general meeting.

(4) The business at the general meeting mentioned in subsection (2) shall include—

(a) the adoption of the bye-laws;

(b) the adoption of forms of share certificates and records of the co-operative society;

(c) the authorising of the issue of shares;

(d) the appointment of an auditor to hold office until the next annual general meeting;

(e) the making of banking arrangements; and

(f) the transaction of any other business.

42. Annual general meetings

- (1) A co-operative society shall hold an annual meeting in each year not later than three months after the end of the financial year of the co-operative society.
- (2) Notwithstanding subsection (1), where the Supervisor receives a written request from the Board of a co-operative society prior to the expiration of the period of three months referred to in subsection (1), the Supervisor may authorise the co-operative society to hold the annual general meeting at any date not later than six months after the end of the financial year of the co-operative society that it considers appropriate.
- (3) The bye-laws may provide for holding semi-annual or other periodic meetings.

43. Special general meeting

- (1) The Board may call a special general meeting of the members of a co-operative society at any time.
- (2) Subject to subsection (3), the Board shall call a special general meeting of the members on receipt of a written request, specifying the purpose of the meeting, from such number of members as may be specified in the bye-laws.
- (3) The Board shall call the special general meeting mentioned in subsection (2) within twenty days of their receipt of the request and the special meeting shall dispose of the business specified in the request.
- (4) The Supervisor may call a special general meeting of the co-operative society—
 - (a) for the purpose of reporting to the members the results of any audit, examination or other investigation of the co-operative society's affairs ordered or made by the Supervisor, or
 - (b) where the co-operative society fails to hold an annual general meeting in accordance with section 42(1) or (2), for the purpose of enabling members to secure any information regarding the affairs of the co-operative society that they are entitled to receive under this Act and to deal with any matters affecting the co-operative society.

44. Meeting called by Supervisor

- (1) Where—
 - (a) in the opinion of the Board it is impracticable—
 - (i) to call a general meeting of members in the manner in which meetings of members may be called; or
 - (ii) to conduct a general meeting of members in the manner prescribed in this Act or in the bye-laws; or
 - (b) for any reason, in addition to those described in paragraph (a), the Supervisor considers appropriate, the Supervisor on its own initiative may, if satisfied that such a meeting is warranted in the circumstances, order a general meeting to be called, held and conducted in any manner that the Supervisor may direct.
- (2) Without restricting the generality of subsection (1), the Supervisor may order that the quorum required in this Act or the bye-laws be varied or dispensed with at a general meeting called under this section.
- (3) A general meeting called under this section shall be a valid general meeting.

45. Resolution in lieu of meeting

- (1) Except where a written statement is submitted by an auditor under section 142—
 - (a) a resolution in writing signed by the number of members entitled to vote on that resolution at a general meeting of members as may be specified in the bye-laws is as valid as if it had been passed at a general meeting of the members; and
 - (b) a resolution in writing dealing with any matter required by this Act to be dealt with at a general meeting of members and signed by all the members entitled to vote at that meeting—
 - (i) satisfies all the requirements of this Act relating to meetings of members; and
 - (ii) subject to subsection (2), is effective from the date specified in the resolution.
- (2) The effective date of a resolution described in subsection (1) (b) (ii) shall not be earlier than the date on which the first member signed the resolution.
- (3) A copy of every resolution described in subsection (1) shall be kept with the minutes of the meetings of members.

46. Notice of meetings

- (l) A co-operative society shall give at least ten days notice of any annual meeting or special meeting to its members—
 - (a) by sending the notice by mail to the members, at the addresses given in the register of members; or
 - (b) by publishing the notice in not less than two issues of a newspaper published and circulated in Antigua and Barbuda, or by posting the notice in a place or through a medium of communication that, as stipulated in the bye-laws and in the opinion of the Board, is prominent and accessible to members.

(2) Notwithstanding any other provision of this Act, where a co-operative society is required to send a statement, agreement, proposal or other document to its members with a notice of a meeting and decides to insert the notice of a meeting in a newspaper under paragraph (1) (b), the co-operative society shall—

(a) in the notice, inform the members of the document, giving a description of the document that, in the opinion of the Board, is adequate to describe its nature; and

(b) make a copy of the document available to any member or delegate who requests it.

(3) The notice of any special meeting shall specify the purpose for which the meeting is being called.

(4) The proceedings or the business transacted at a general meeting shall not be invalidated by reason only of the non-receipt by a member of notice of the meeting.

47. Fixing of record date

(1) Subject to subsection (2), for the purpose of determining members—

(a) entitled to receive payment of a bonus or dividend;

(b) entitled to participate in a distribution on liquidation; or

(c) for any purpose in addition to that described in paragraph (a) or (b), except the right to receive notice of or to vote at a general meeting, the Board may fix in advance a date as the record date for the determination of members.

(2) The record date mentioned in subsection (1) shall not precede, by more than 30 days, the particular action to be taken.

(3) Subject to subsection (4), for the purpose of determining members entitled to receive notice of a general meeting, the Board may fix in advance a date as the record date for the determination of members.

(4) The record date mentioned in subsection (3) shall not precede, by more than fifty days or by less than eleven days, the date on which the meeting is to be held.

(5) Where the Board does not fix a record date—

(a) the record date for the determination of members entitled to receive notice of a general meeting shall be—

(i) the close of business on the day immediately preceding the day on which the notice is given; or

(ii) if no notice is given, the day on which the meeting is held; and

(b) the record date for the determination of members for any purpose other than that described in paragraph (a) shall be at close of business on the day on which the Board passes a resolution relating to that purpose.

48. Quorum

(1) Subject to subsection (2), the quorum at any annual general or special meeting of members shall be that specified in the bye-laws.

(2) Except where all the members are directors, the number of members present at an annual meeting, general meeting or special meeting shall not be less than the number of directors plus three.

(3) Subject to the bye-laws, where a quorum is present at the opening of a general meeting of members the members present may proceed with the business of the meeting.

(4) Where a quorum is not present thirty minutes after the time fixed for the commencement of a general meeting of members—

(a) the members present may adjourn the meeting to a time and place to be determined by the Board but not later than thirty days after the date of the adjourned meeting and may not transact any other business.

(b) the Supervisor or the Supervisor's representative may direct that the meeting proceeds if the Supervisor is satisfied that the meeting was convened in accordance with the Act and that the members present were properly notified and constitute at least seventy five per cent of the amount required for a quorum.

(5) If at the adjourned meeting there is no quorum the members present constitute a quorum and may proceed with the meeting.

49. Delegates

(1) Where the bye-laws of a co-operative society provide for the nomination and appointment of delegates to a general meeting—

(a) the delegates shall exercise the powers of membership at any annual or special meeting; and

(b) any reference in this Act with respect to the exercise of any power mentioned in paragraph (a) shall be construed as a reference to delegates.

(2) The members who elect delegates may, at a special meeting called for the purpose or at any annual meeting—

(a) remove the delegates in any manner provided for in the bye-laws; and

(b) notwithstanding subsection (1), amend the bye-laws to eliminate the nomination and appointment of delegates.

50. Notice of motion

- (1) A member who is entitled to vote at an annual meeting of members may—
- (a) submit to the co-operative society a notice of motion with respect to any matter that he proposes to raise at the meeting; and
 - (b) discuss at the meeting any matter with respect to which he would have been entitled to submit a notice of motion.
- (2) Where a member submits a notice of motion and requests the co-operative society to send the notice of motion with the notice of the meeting at which the motion is to be presented or make the notice of motion available to all members entitled to attend and vote at that meeting, the co-operative society shall comply.
- (3) Where a member submits a notice of motion and requests the co-operative society to include in or attach to the notice of motion—
- (a) a statement by the member of not more than two hundred words in support of the motion; and
 - (b) the name and address of the member, the co-operative society shall comply.
- (4) A co-operative society is not required to comply with subsections (2) and (3) where—
- (a) the notice of motion is not submitted to the co-operative society at least forty-five days before the anniversary date of the previous annual general meeting of members;
 - (b) in the opinion of the directors, the notice of motion is submitted by the member primarily for the purpose of—
 - (i) enforcing a personal claim or redressing a personal grievance; or
 - (ii) promoting general economic, political, racial, religious, social or similar causes;
 - (c) the co-operative society, at the member's request, included a notice of motion in a notice of a meeting of members held within two years preceding the receipt of the notice of motion submitted under subsection (1), and the member failed to present the notice of motion at the meeting;
 - (d) substantially the same notice of motion was submitted to members in the notice of a meeting of members held within two years preceding the receipt of the members request, and the notice of motion was defeated; or
 - (e) in the opinion of the Board, the rights conferred by this section are being abused to secure publicity.
- (5) A member who requests that a notice of motion and any statement be sent with the notice of the meeting at which the motion is to be presented shall pay the cost of sending the notice of motion and statement, unless the members present at the meeting provide otherwise by a majority vote.
- (6) A co-operative society or a person acting on behalf of a co-operative society shall not incur any liability by reasons only of circulating a notice of motion or statement in compliance with this section.
- (7) Where a co-operative society refuses to include a notice of motion in a notice of a meeting, the co-operative society shall, within thirty days after receiving the proposal—
- (a) notify the member submitting the notice of motion of its intention to omit the notice of motion from the notice of the meeting; and
 - (b) send to the member a statement of the reasons for the refusal.
- (8) Where a member claiming to be aggrieved by a refusal under subsection (7) applies to the Supervisor, the Supervisor may suspend the holding of the meeting to which the motion is sought to be presented and give any directions that it may consider appropriate.
- (9) A co-operative society or a person claiming to be aggrieved by a notice of motion may apply for permission for the co-operative society to omit the notice of the meeting and, where the Supervisor is satisfied that subsection (5) applies, the Supervisor may give permission.
- (10) In this section “notice of motion” means a notice of motion submitted to a co-operative society under subsection (1)(a).

51. Power to make bye-laws

- (1) Subject to this Act and the bye-laws, the members of a co-operative society may, at any annual meeting or any special meeting called for the purpose, make, amend, repeal, replace or confirm any bye-laws, where written notice of the proposed making, amendment, repeal, replacement or confirmation—
- (a) is forwarded to each member of the co-operative society with the notice of the meeting at which the making, amendment, repeal, replacement or confirmation is to be considered, by a majority of members present and voting at that meeting; or
 - (b) is not forwarded to each member of the co-operative society with the notice described in paragraph (a), by a three-fourths majority of members present and voting at the meeting.
- (2) A member may make a proposal, in the manner provided in section 50, to make, amend, repeal, replace or confirm any bye-law.

52. Effective date of the bye-laws

(1) Bye-laws shall not have any force or effect unless three copies of the bye-laws, certified to be true copies by the president and secretary of the co-operative society, are filed with and approved by the Supervisor.

(2) Subject to subsection (3), where proposed bye-laws are certified under subsection (1) and receives the members' approval required in section 51(1), the bye-laws shall have immediate force and effect.

(3) Bye-laws described in subsection (2) shall cease to have any force or effect on the expiration of sixty days after the date of the general meeting in which it is approved by the members, unless, within that sixty day period, the bye-laws are filed with the Supervisor under subsection (1).

(4) Where the Supervisor approves bye-laws, it shall return to the co-operative society one copy of the bye-laws with the approval of the Supervisor stamped on the bye-laws.

PART IV MANAGEMENT

53. Board of directors and Committees

(1) A co-operative society shall be managed by a Board of directors which shall be constituted in accordance with this Act and the bye-laws of the co-operative society.

(2) The Board shall be constituted by not less than five or not more than thirteen directors.

(3) The members of a co-operative society may amend the bye-laws to vary the number of directors, but no amendment to decrease the number of directors shall affect an incumbent director.

(4) A person who—

(a) has been sentenced by a Court in any country for an offence involving fraud or dishonesty and has not received a free pardon for that offence;

(b) is not in good financial standing with a co-operative society;

(c) has made an arrangement with his creditors;

(d) was a director of a failed co-operative society of the same type;

(e) has been convicted on indictment of an offence in connection with the promotion, formation or management of a body corporate;

(f) has been convicted of an offence under this Act;

(g) is of unsound mind and has been so found by a court in Antigua and Barbuda;

(h) is or becomes bankrupt;

(i) is under the age of eighteen years or, in the case of a junior co-operative, under the age of ten years;

(j) has not been a member of the co-operative society or a duly appointed representative of a member co-operative society for the past twelve months;

(k) is a member who has not transacted any business with the co-operative society for twelve consecutive months, or who represents a member co-operative society who has not transacted any business with the co-operative society for twelve consecutive months;

(l) is an employee of the co-operative society or of the Supervisor, or is a partner or employee of the co-operative society's auditor, or of the apex body;

(m) holds less than the minimum level of equity shares in accordance with section

13(1)(a)(v); or (n) is already part of the management of another co-operative society of the same type, may not constitute part of the management of a co-operative society, until his disability is removed, but he shall retain his membership of the co-operative society during the period of such disability.

(5) For the purposes of this Part "management" includes—

(a) a person who holds membership of the Board or any committee established by a cooperative society; and

(b) a person who is employed by the Board.

(6) A person who knowingly holds membership of the Board or of a committee of a co-operative society, or who knowingly seeks employment with, or is employed or continues to be employed by a co-operative society whilst disqualified under this section commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding ten thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both.

54. Officers

(1) A co-operative society—

(a) shall have a president, a vice-president, a treasurer and a secretary; and

(b) may have any officers in addition to those mentioned in paragraph (a) that are provided for in the bye-laws.

(2) Subject to the bye-laws—

(a) the Board may designate the officers of the co-operative society, appoint persons as officers, specify the officers' duties and delegate powers to manage the business and affairs of the co-operative society to them; and

- (b) a director may be appointed as an officer of the co-operative society.
- (3) A person shall not be president, vice-president or treasurer of a co-operative society unless he is a director of the co-operative society.

55. Provisional directors and elected directors

- (1) On the registration of a co-operative society, the individuals whose names appear in the application for registration as having been appointed and have consented to act as provisional directors—
 - (a) shall have all the powers and perform the duties of directors; and
 - (b) shall hold office until the first general meeting.
- (2) At the first general meeting and at every annual general meeting the directors shall be elected in accordance with this Act and the bye-laws.

56. Powers of Board

- Subject to this Act and the bye-laws, the Board shall—
- (a) exercise the powers of the co-operative society directly, or indirectly through the employees and agents of the co-operative society;
 - (b) ensure the good governance and direct the management of the business and affairs of the co-operative society; and
 - (c) formulate and implement the policies of the co-operative society.

57. Committees generally

- (1) The Board may establish committees for the more efficient management of various aspects of the business or affairs of the co-operative society.
- (2) A committee established under subsection (1) may consist of members of the Board and other members of the co-operative society.
- (3) No committee may—
 - (a) fill vacancy among the directors;
 - (b) declare a bonus or a dividend;
 - (c) approve any financial statement of the co-operative society;
 - (d) submit to the members any question or matter requiring the approval of members; or
 - (e) make decisions where this Act or the bye-laws require a two-thirds majority or a unanimous vote of the Board.

58. Tenure of committees generally

- (1) Committees appointed under section 57(1) shall hold office for a period not exceeding one year.
- (2) A committee member appointed under section 57(1) may be removed by resolution of the cooperative society or of the Board.
- (3) The removal of a committee member who is a director shall not affect his office as a director.
- (4) A committee shall—
 - (a) fix its quorum at not less than a majority of its members;
 - (b) keep minutes of its proceedings; and
 - (c) submit to the Board at each meeting of the Board and to the annual general meeting of the co-operative society the minutes of the committee's proceedings since the most recent meeting of the Board or of the co-operative society.

59. Credit committee

- (1) A credit union, central credit union and central co-operative society shall have a credit committee which shall be elected by its members at the annual general meeting.
- (2) A person shall not be elected to the credit committee if the person is not present at the meeting at which the election is held, unless the person tenders an excuse for his absence which is accepted by the majority of the members present.
- (3) The members of the credit committee shall hold office for such term as the bye-laws provide and until their successors are elected.
- (4) The credit committee shall consist of such number of members as may be fixed by the bye-laws, which shall be not less than three.
- (5) A person shall not be a member of the credit committee if that person is a member of the Board
or of the supervisory and compliance committee or is an employee of the credit union, central credit union or central cooperative society; or has a delinquent loan with the credit union, central credit union or central co-operative society.
- (6) A majority of members of the credit committee shall constitute a quorum.
- (7) The election of members of the credit committee shall proceed in keeping with subsections (a) to (d) of section 72 (1).

(8) Where a vacancy occurs in the credit committee, the Board may fill the vacancy until the next annual meeting of the credit union, central credit union or central co-operative society.

(9) The bye-laws of the a credit union, central credit union or central co-operative society may provide for the election and retirement of members of the credit committee in rotation so that no member of the credit committee shall be elected for a term of more than three years but no person may serve as a member of the credit committee of a co-operative society for more than two consecutive terms or an aggregate of six successive years.

60. Duties of credit committee

The credit committee shall—

- (a) implement and ensure implementation of the approved loan policy;
- (b) provide prudent oversight of the loans portfolio;
- (c) make recommendations to the Board in respect of the loan policy of the credit union; and
- (d) perform such duties as may be prescribed under this Act and the bye-laws of the credit union.

61. Approval of loans

(1) The Board shall determine the terms and conditions under which the credit committee shall approve loans to members.

(2) The credit committee may, upon such terms and conditions as the Board may specify, authorize the manager, loans manager or other employees of the credit union to approve loans to members.

(3) A person authorised by the Board to approve loans under subsection (1) or (2) shall submit a written monthly report to the credit committee stating the number of loan applications received, the number of loans granted, the security, if any, obtained for such loans and any risks associated with those loans.

(4) The responsibilities and duties of any person authorised to approve loans under subsection (2) are concurrent with the responsibilities and duties of the credit committee.

62. Credit committee reports

(1) The credit committee shall—

- (a) meet at least once every month;
 - (b) keep minutes of its meetings;
 - (c) submit a monthly report to the Board stating—
 - (i) the number and category of loan applications;
 - (ii) the number and category of loans granted;
 - (iii) the security taken and risks for loans granted; and
 - (iv) applications denied, delinquent loans, classified loans, loans written off, watch listed accounts, large credit exposures and related party loans; and
 - (d) submit an annual report on the matters referred to in paragraph (c), and on the loan portfolio quality and trends, to the annual meeting of the credit union.
- (2) The members of a credit union may, by special resolution in a special meeting called for the purpose, remove a credit committee which fails to comply with subsection (1)(c).

63. Removal of members of credit committee

(1) The members of a credit union may, by resolution passed by two-thirds of the votes cast at a general meeting called for the purpose, remove a member of a credit committee before the expiration of his term of office, and shall at that meeting elect another member in place of the first mentioned member for the unexpired portion of his term.

(2) The notice calling the meeting of members referred to in subsection (1) shall specify that the purpose of the meeting is to remove the member of the credit committee who is named in the notice.

(3) A member of a credit committee removed under this section shall have the right to make such representations at the general meeting to the members of the credit union regarding the resolution for his removal as he may think fit, and may be represented at the general meeting by an attorney-at-law or an agent.

64. Removal of members of credit committee by Board

Where a member of a credit committee fails to attend three consecutive meetings without, in the opinion of the Board, reasonable cause or fails to perform any of the duties allotted to the member as a member of the credit committee, the member's position on the credit committee may be declared vacant by the Board who may then appoint a qualified person to fill the vacancy until the next annual general meeting of the credit union.

65. Supervisory and compliance committee

- (1) A co-operative society shall have a supervisory and compliance committee who shall be elected by its members at the annual general meeting.
- (2) A person shall not be elected to a supervisory and compliance committee if that person is not present at the meeting at which the election is held, unless he tenders an excuse for his absence which is accepted by the majority of the members present.
- (3) The members of a supervisory and compliance committee shall hold office for a term of three years or until such time that their successors are elected whichever is later.
- (4) The supervisory and compliance committee shall consist of the number of members specified in the bye-laws, which shall be not fewer than three.
- (5) A person who is a member of the Board or the credit committee or who is an employee of the cooperative society shall not be a member of the supervisory and compliance committee.
- (6) A majority of members of the supervisory and compliance committee shall constitute a quorum.
- (7) The election of members of the supervisory and compliance committee shall proceed in keeping with subsections (a) to (d) of section 72 (1).
- (8) Where a vacancy occurs in the supervisory and compliance committee, the supervisory and compliance committee may fill such vacancy until the next annual meeting of the co-operative society.
- (9) The bye-laws of a co-operative society may provide for the election and retirement of members of the supervisory and compliance committee in rotation, except that a member of the supervisory and compliance committee shall not—
 - (a) be elected for a term exceeding three years;
 - (b) serve for more than six successive years but shall become eligible for re-election after the expiration of one year.

66. Duties, functions and powers of supervisory and compliance committee

- (1) The supervisory and compliance committee shall—
 - (a) keep minutes of its meetings;
 - (b) make or cause to be made not less than twice in the period before the next annual general meeting of the co-operative society, an examination of the books and documents of the co-operative society which shall include an inspection of the securities, cash accounts and all records relating to loans, purchases and sales;
 - (c) make or cause to be made, once in the period before the next annual general meeting, a comparison between the pass-book or statement of account of a random sample of at least 10% of all the members of the co-operative society and the appropriate records of the co-operative society;
 - (d) ascertain that all actions and decisions of the Board, committees, management and staff relating to the affairs of the co-operative society are in accordance with this Act, the Regulations, the bye-laws and the approved standards and policies of the co-operative society;
 - (e) submit a written report on the results of its examinations and enquiries under this section to the Board and the management of the co-operative society within seven days of each meeting of the supervisory and compliance committee; and
 - (f) submit a written report on the result of its examinations and enquiries under this section to the next annual general meeting or, if it thinks fit, to a special general meeting of the cooperative society.
- (2) The supervisory and compliance committee shall have access, at all times, to the books and documents of the co-operative society.
- (3) Members of the supervisory and compliance committee may attend meetings of the Board and all other committees of the co-operative society as observers.

67. Compliance officer

- (1) The Board shall appoint a senior qualified professional to monitor and periodically report to the supervisory and compliance committee and the Board on the levels of awareness, adherence and compliance in the internal operations of the society.
- (2) A compliance officer appointed under subsection (1) shall track gaps and improvements in compliance with the Act, other applicable legislation, standards and best practices in keeping with legislation and guidelines in force relating to anti-money laundering and combating terrorist financing and shall report suspicious transactions or activities to the Supervisory Authority as prescribed in section 13(2) of the Money Laundering (Prevention) Act and 34 of the Prevention of Terrorism Act.

68. Misappropriation and other contraventions of the Act

- (l) When the supervisory and compliance committee is of the opinion that the funds, securities or other property of the co-operative society have been misappropriated or misdirected, or that the byelaws of the co-operative society, this Act have been

contravened, by the Board or a director, the credit committee or a member of the credit committee or by an officer or employee engaged by the Board, the supervisory and compliance committee shall immediately inform the Board and the Supervisor in writing.

(2) The supervisory and compliance committee shall with the approval of the Board appoint an auditor or some other body to undertake a review to investigate or assist in determining whether any of the funds, securities or other property of the co-operative society have been misappropriated or misdirected and the remuneration of any auditor or other body to be appointed shall be determined by the supervisory and compliance committee and paid by the co-operative society.

(3) In the event of a misappropriation or misdirection or contravention, or a suspected misappropriation or misdirection or contravention, pending the outcome of the investigation or review referred to in subsection (2), the supervisory and compliance committee may suspend any member of the Board or member of the credit committee after having given the member an opportunity to be heard by the supervisory and compliance committee.

(4) On the completion of the investigation or review referred to in subsection (2), if the supervisory and compliance committee considers that the Board, a director, the credit committee or an officer or employee engaged by the Board has taken any action or decision which is not in accordance with this Act or the bye-laws, then, after consultation with the Supervisor, the supervisory and compliance committee may—

(a) suspend the officer by a unanimous vote of all the members of the supervisory and compliance committee taken at a meeting of the supervisory and compliance committee called for the purpose of considering the officer's suspension; and

(b) convene a special general meeting of the co-operative society to consider whether to remove the officer in light of the action or decision taken by the officer.

(5) Where the Board or a Board member, the credit committee or a member of that committee or an officer or employee engaged by the Board has been suspended by the supervisory and compliance committee in accordance with subsection (4), the committee shall convene for a date not more than twenty-one days after the suspension, a special general meeting of the society—

(a) for the purpose of reviewing the suspension; and

(b) to consider whether to remove the officer in the light of the action or decision taken by the officer.

(6) Without prejudice to the requirements of section 46, not less than ten days before the date of a meeting of the supervisory and compliance committee called as mentioned in subsection (4) or the date of a special general meeting of the co-operative society convened as mentioned in subsection (4) or (5), the supervisory and compliance committee shall give written notice of the meeting to the Supervisor and to the officer concerned.

(7) At a special general meeting of a co-operative society held under this section, the members of the co-operative society, according to the purpose or purposes for which the meeting was convened, may, by secret ballot—

(a) ratify the suspension of the officer concerned and remove the officer from office; or

(b) rescind the suspension of the officer, but an officer shall not be removed from office without being given an opportunity to be heard by the members present at the meeting.

(8) Where an officer of a co-operative society is removed from office at a special general meeting under subsection (7), the vacancy caused by the removal shall be filled in such manner as may be determined by the meeting.

69. Meetings of the supervisory and compliance committee

The supervisory and compliance committee shall meet at least once every month and shall meet the Board at least four times in every year to review the Board's performance of its functions.

70. Removal of member of supervisory and compliance committee by the committee

When a member of the supervisory and compliance committee fails to attend three consecutive meetings of the supervisory and compliance committee without, in the opinion of the supervisory and compliance committee, reasonable cause, or fails to perform any of the duties allotted to the supervisory and compliance committee as a member of the supervisory and compliance committee, the member's position on the supervisory and compliance committee may be declared vacant by the remaining members of the supervisory and compliance committee who may appoint a qualified person to fill the vacancy until the next annual general meeting of the co-operative society.

71. Removal of members of supervisory and compliance committee by members

(1) The members of a co-operative society may, by resolution passed by two-thirds of the votes cast at a general meeting duly called for that purpose, remove a member of a supervisory and compliance committee before the expiration of his term of office, and shall

by vote cast at the meeting elect another member in his stead for the unexpired portion of his term.

(2) The notice calling the meeting of members referred to in subsection (1) shall state that the purpose of the meeting is to remove the member of the supervisory and compliance committee who is named in the notice.

(3) A member of the supervisory and compliance committee removed under this section shall have the right to make such representations to the members at a general meeting regarding the resolution for his removal as he may think fit, and may be represented at the general meeting by an attorney-at-law or an agent.

72. Election of directors

(1) Subject to section 73 and to the Regulations—

(a) the election of directors shall take place annually at the annual general meeting;

(b) the directors shall hold office until the conclusion of the meeting at which their successors are elected, and shall be eligible for re-election;

(c) the period for nomination shall be deemed closed thirty days prior to the date of the meeting at which elections shall be held

(d) where the number of nominees exceeds the number of directors to be elected, the election of directors may be by secret ballot;

(e) every member shall have the right to vote for the number of directors to be elected and any voting sheet that contains the names of more than the number to be elected shall be void;

(f) where there are vacancies on the Board but the remaining directors constitute a quorum, they shall call a special meeting of the Board for the purpose of appointing members to fill any such vacancy until the next annual general meeting; and

(g) where there is a vacancy on the Board and there is not a quorum of directors, the remaining directors shall call a special meeting of the co-operative society for the purpose of electing members to fill any vacancy.

(2) Where an election of directors required by this Act or the bye-laws does not take place at the proper time, the directors then in office shall continue in office until their successors are elected.

(3) Subject to sections 216(1) and 220, not more than one-third of the directors may be employees of a co-operative society.

(4) Unless a reasonable excuse is received in writing by the meeting, a person shall not be elected as a director if the person is not present at the meeting at which the election is being conducted.

(5) Subject to section 52(3), the Board shall consist of such numbers as may be fixed by the bye-laws.

73. Tenure of directors

(1) Subject to subsection (3) the directors of a co-operative society shall be elected for a term of three years.

(2) A person shall not serve as a director of a co-operative society for more than six consecutive years but thereafter the person will become eligible for re-election after the expiration of one year out of office.

(3) After the commencement of this Act, on the formation of each new society, or on the reconstitution of a previously registered co-operative society, at the next annual general meeting of members the election of the Board, the supervisory and compliance committee and the credit committee shall be on a rotational basis as follows:

(a) at least one-third shall be elected to serve for one year;

(b) at least one-third shall be elected to serve for two years; and

(c) the remainder shall be elected to serve for three years, and thereafter each elected member of the Board, the supervisory and compliance committee and the credit committee shall serve for a term of three years.

74. Additional powers of the Board

(1) Subject to the bye-laws and the Regulations, the Board may without authorisation of the members of a co-operative society—

(a) borrow money on the credit of the co-operative society;

(b) issue, re-issue, sell or pledge debt obligations of the co-operative society;

(c) give a guarantee on behalf of the co-operative society to secure performance of an obligation of any person; and

(d) mortgage, charge, hypothecate, pledge or otherwise create a security interest in all or any property of the co-operative society, owned or subsequently acquired, to secure any debt obligation of the co-operative society.

(2) A sale, lease, exchange of all or substantially all of the property of a co-operative society, other than in the ordinary course of business of the co-operative society, shall be approved by the members in a manner provided in subsections (3) to (7).

(3) The Board shall send in the manner provided in section 46, a notice of a special meeting to consider the sale, lease or exchange mentioned in subsection (2) to each member.

(4) The notice mentioned in subsection (3) shall be accompanied by a copy or summary of the agreement of sale, lease, or exchange mentioned in subsection (2).

(5) At a special meeting held under this section, the members may by special resolution—

(a) authorise the sale, lease or exchange mentioned in subsection (2); and

(b) agree to or authorise the directors to agree to any terms and conditions of sale, lease or exchange.

(6) Each member of the co-operative society has the right to vote with respect to sale, lease or exchange mentioned in subsection (2).

(7) A sale, lease or exchange mentioned in subsection (2) is adopted when the members of the cooperative society have approved the sale, lease or exchange by a special resolution.

75. Validity of acts of directors and officers

The act of a director or officer is valid notwithstanding an irregularity in his election or a defect in his appointment or qualification.

76. Indemnification of directors and officers

(1) Subject to subsections (2) and (3), a co-operative society may indemnify—

(a) a director or officer of the co-operative society;

(b) a former director or officer of the co-operative society; and

(c) a person who acts or has acted at the request of the co-operative society as a director or officer of a body corporate of which the co-operative society is or was a member or a creditor; against costs, charges and expenses, including an amount paid to settle an action or satisfy a judgment, reasonably incurred by that person with respect to a civil, criminal or administrative action or proceeding to which that person is made a party by reason of the person being or having been a director or officer of the co-operative society or the body corporate.

(2) A co-operative society may indemnify a director, officer, or other person referred to in subsection

(1) only where that person—

(a) acted honestly and in good faith with a view to the best interest of the co operative society; and

(b) in the case of a criminal, civil or administrative action or proceeding that is enforced by a monetary penalty, had reasonable grounds for believing that the conduct was lawful.

(3) A co-operative society shall not indemnify a director, officer or other person referred to in subsection (1) with respect to an action by or on behalf of the co-operative society to obtain a judgment in its favour to which the person is made a party by reason of the person being or having been a director or an officer of the co-operative society, against costs, charges and expenses reasonably incurred by the person in connection with the action unless—

(a) the co-operative society has the approval of the court; and

(b) the person fulfils the conditions described in subsection (2).

(4) Notwithstanding subsections (1) to (3), a co-operative society shall indemnify a director, officer or other person referred to in subsection (1) who has been substantially successful in the defence of a civil, criminal or administrative action or proceeding to which the person is made a party by reason of the person being or have been a director or officer of the co-operative society or body corporate against costs, charges and expenses reasonably incurred by the person with respect to the action or proceedings.

(5) A co-operative society or a director, officer or other person referred to in subsection (1) may apply to the court for an order approving the indemnity and the court may make the order.

(6) On an application under subsection (5), the court may order notice to be given to an interested person, and that interested person is entitled to appear and be heard in person or by an attorney-atlaw.

77. Duty of care of directors and officers

Every director and officer of a co-operative society in exercising his powers and discharging his duties shall—

(a) act honestly and in good faith with a view to the best interests of the co-operative society; and

(b) exercise the care, diligence and skill that a reasonably prudent person would exercise in comparable circumstances, and shall be liable to make good any loss or damage suffered by the co-operative society as a direct or indirect result of a contravention of this section.

78. Ambit of duty

The provisions of a contract, the bye-laws or the circumstances of his appointment do not relieve a director from—

- (a) the duty to act in accordance with this Act; or
- (b) liability that by virtue of a rule of law would otherwise attach to him with respect to negligence, default, breach of duty or breach of trust of which he may be guilty in relation to the co-operative society.

79. Liability of directors

(1) Where directors vote for, or consent to, a resolution authorising, or approve by any other means—

- (a) the purchase of shares of another co-operative society contrary to section 100;
- (b) the payment of a dividend on shares contrary to section 129;
- (c) the payment of a bonus contrary to section 129;
- (d) a loan or guarantee or the giving of financial assistance contrary to section 121;
- (e) a payment of an indemnity described in section 76 to a director or a former director, without the approval of the court required by section 76(3); or
- (f) an act not consistent with the purpose of the co-operative society as set out in its byelaws and with respect to which the co-operative society has paid compensation to a person, they are jointly and severally liable to make good any loss or damage suffered by the co-operative society.

(2) On the application of a director, the court may declare whether or not, having regard to any circumstances the court may consider appropriate—

- (a) the co-operative society is insolvent; or
- (b) the payment of a bonus or dividend or the lending of money would make the co-operative society insolvent.

(3) The liability imposed by subsection (1) is in addition to and not in derogation from a liability imposed on a director by any other enactment or law.

(4) Subject to subsection (5), for the purpose of this section, a director who is present at a meeting of directors or of a committee shall be deemed to have cast a vote in favour of a resolution or of granting the approval mentioned in subsection (1), unless—

- (a) the director's dissent is entered in the minutes of the meeting; or
- (b) the director's written dissent is—
 - (i) delivered to the secretary of the meeting before its adjournment; or
 - (ii) delivered or sent by registered mail to the registered office of the co-operative society immediately after the adjournment of the meeting.

(5) A director who votes for or consents to a resolution mentioned in subsection (1) is not entitled to dissent under subsection (4).

(6) Where a director is not present at a meeting of directors or of a committee at which a vote, resolution or approval mentioned in subsection (1) is cast or given, the director shall be taken to have cast an affirmative vote, consented to the resolution or given approval, unless, within fourteen days after becoming aware of the proceedings, the director delivers or sends by registered mail his written dissent to the registered office of the co-operative society.

(7) On receipt of a written dissent, the secretary of the co-operative society shall—

- (a) certify on the written dissent the date, time and place it is received; and
- (b) keep the written dissent in the minutes of the meeting at which the resolution was passed.

(8) An action to enforce a liability imposed in subsection (1) shall not be commenced after two years from the date of the meeting at which the vote, resolution or approval was taken or given.

(9) In an action to enforce a liability imposed in subsection (1), the Court may, on the application of the co-operative society or a defendant—

- (a) join as a defendant a person who received a benefit as a result of the resolution complained of; and
- (b) make the person mentioned in paragraph (a) liable to the co-operative society jointly and severally with the directors to the extent of the amount paid to the person.

(10) A director shall not be liable under subsection (1) where the director—

- (a) proves that he did not know or could not reasonably have known that the act authorized by the resolution was contrary to this Act;
- (b) relies and acts in good faith—

- (i) on statements of facts represented to him by an officer of the co-operative society to be correct; or

- (ii) on statements contained in a written report or opinion of the auditor of the cooperative society or a professional person engaged by the co-operative society who is competent to give advice in respect to the matter.

(11) A director who is found liable under subsection (1) is entitled to apply to a court for an order compelling a member or other recipient to pay or deliver to the director any money or

property that was paid or distributed to the member, or other recipient contrary to section 100, 121 or 129.

(12) In connection with an application under subsection (11) and where the court is satisfied that it is equitable to do so, it may—

(a) order a member or other recipient to pay or deliver to a director any money or property that was paid or distributed to the member or other recipient contrary to section 100, 121 or 129; or

(b) make an order, other than that described in paragraph (a), that it considers appropriate.

80. Misuse of confidential information

(1) A director, officer, committee member or employee or an associate of a director, officer, committee member or employee, who, in connection with a transaction relating to shares of a co-operative society or a debt obligation of a co-operative society, makes use of confidential information for the benefit or advantage of himself or herself or an associate that, if generally known, might reasonably be expected to affect materially the value of the share or the debt obligation—

(a) is liable to compensate any person for a direct loss suffered by the person as a result of the transaction, unless the information was known or reasonably should have been known to the person at the time of the transaction; and

(b) is accountable to the co-operative society for any direct benefit or advantage received or receivable by him or his associate as a result of the transaction.

(2) Subject to subsection (3), a person who has acquired confidential information concerning a co-operative society or a member of a co-operative society—

(a) as a director, committee member, officer, employee or auditor of the co-operative society;

(b) as a liquidator, receiver or manager, of the co-operative society; or

(c) as a Supervisor, an officer or staff of the Commission; shall not disclose that information except as permitted under subsection (3), or use that information for any personal benefit not related to the duties through which the information was acquired.

(3) Subsection (2) does not apply to the giving of confidential information—

(a) where the information is given in the course of that person's duty;

(b) where the information is a general credit rating of a person that is supplied by a director or employee of the co-operative society following a bona fide business request;

(c) where the information relates to a member of a co-operative society and is given with the written authorisation of that member or his legal representative;

(d) where the information relates to a co-operative society and is given with the written authorisation of the co-operative society or its legal representative; or

(e) where the information is required to be disclosed by law or by an order of the Court.

(4) A person who contravenes subsection (2) commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding ten thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both.

81. Declaration of interests

(1) A director, committee member or employee of a co-operative society who—

(a) is a party to a material contract or proposed material contract with the co-operative society; or

(b) is a director, committee member or employee of, or has a material interest in, a person who is party to a material contract or proposed material contract with the co-operative society, shall disclose in writing to the co-operative society the nature and extent of his interest.

(2) The disclosure required by subsection (1) shall be made—

(a) immediately after the director, committee member or employee becomes aware that the contract or proposed contract is to be considered or has been considered at a meeting of the Board;

(b) if the director, committee member or employee becomes interested after a contract is made, immediately after he becomes so interested; or

(c) where the director, committee member or employee has an interest in a contract before assuming office, immediately after he becomes a director, committee member or employee.

(3) For the purposes of this section, a general notice to the directors by a director, committee member or employee of a co-operative society declaring that he is to be regarded as interested in any contract made with that person is a sufficient declaration of interest in relation to any contract made with that person.

82. Disclosure of interests at meetings

(1) If a director, committee member or employee of a co-operative society has any pecuniary interest, direct or indirect, in any contract, proposed contract or other matter and is present at a meeting of the co-operative society, Board or committee at which the

contract, proposed contract or other matter is the subject of consideration, he shall at the meeting and as soon as practicable after its commencement disclose the fact and shall not take part in the consideration or discussion of the contract, proposed contract or other matter or vote on any question with respect to it and shall be excluded from the meeting for the duration of the consideration, discussion and voting procedure.

(2) A person who fails to comply with the provisions of subsection (1) commits an offence and is liable—

(a) on summary conviction to a fine not exceeding twenty thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding 2 years, or to both; or

(b) on conviction on indictment to a fine not exceeding fifty thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding 2 years, or to both, unless the person proves that he did not know that the contract, proposed contract or other matter in which he had a pecuniary interest was the subject of consideration at that meeting.

(3) A disclosure under subsection (1) shall be recorded in the minutes of the meeting of the cooperative society, Board or committee.

(4) An act or proceeding of the co-operative society, Board or committee shall not be questioned on the ground that a director, committee member or employee has contravened this section.

(5) Where a director, committee member or employee of a co-operative society is not entitled to vote at a meeting under subsection (1) and his presence is required to constitute a quorum at the meeting, a decision of the co-operative society, Board or committee is to be taken not to be invalid only by reason of the absence of the director, committee member or employee.

(6) Where a director, committee member or employee of a co-operative society fails to disclose his interest in a contract, proposed contract or other matter in accordance with this section, a court may, on the application of a co-operative society or a member of the co-operative society, set aside the contract or other matter on any terms that the court considers appropriate.

83. Pecuniary interests for the purposes of section 82

(1) For the purposes of section 82, a director, committee member or employee shall be treated, subject to the following provisions of this section and to section 84, as having indirectly a pecuniary interest in a contract, proposed contract or other matter if—

(a) he or his nominee is a member of a company or other body with which the contract was made or is proposed to be made or which has a direct pecuniary interest in the licence or other matter under consideration; or

(b) he is a partner, or is in the employment of a person with whom the contract was made or is proposed to be made, or who has a direct pecuniary interest in the licence or other matter under consideration; or

(c) he or his partner is a professional adviser to a person who has a direct or indirect pecuniary interest in a contract, proposed contract or other matter.

(2) Subsection (1) does not apply to membership of or employment under any public body.

(3) In the case of married persons the interest of one spouse shall be deemed for the purpose of section 82 to be also the interest of the other.

84. Removal or exclusion of disability

(1) Section 82 does not apply to an interest in a contract, proposed contract or other matter which a director, committee member or employee of a co-operative society has as a member of the public or to an interest in any matter relating to the terms on which the right to participate in any service is offered to the public.

(2) Where a director, committee member or employee of a co-operative society has an indirect pecuniary interest in a contract, proposed contract or other matter by reason only of a beneficial interest in securities of a company or other body, and the nominal value of those securities does not exceed five thousand dollars or one-thousandth of the total nominal value of the issued share capital of the company or other body, whichever is the less, and if the share capital is of more than one class, the total nominal value of shares of any one class in which he has a beneficial interest does not exceed one-thousandth of the total issued share capital of that class, section 82 shall not prohibit him from taking part in the consideration or discussion of the contract, proposed contract or other matter or from voting on any question with respect to it, without prejudice, however, to his duty to disclose his interest.

85. Meetings of directors generally

(1) Subject to the bye-laws, the directors may meet at any place, and on any notice that they consider appropriate.

(2) The president—

(a) may call a meeting of directors at any time; and

(b) on the written request of at least two directors, shall call a meeting within fourteen days of the receipt of the request.

(3) A majority of the directors shall constitute a quorum at any meeting of directors.

(4) Subject to the bye-laws, a notice of a meeting of directors may specify the purpose of or other business to be transacted at the meeting.

(5) For the purpose of subsection (4), attendance of a director at a meeting of directors is deemed to be a waiver of notice of the meeting, unless the director attends the meeting for the express purpose of objecting to the transaction of any business on the ground that the meeting is not lawfully called.

(6) Where the time and place of an adjourned meeting is announced at the original meeting, notice of an adjourned meeting of directors is not required to be given to the directors present at that meeting, but shall be given to any directors not so present.

86. Meetings by telephone

(1) Subject to the bye-laws, where all the directors consent, a meeting of directors or of a committee may be held by means of—

(a) a telephone system; and

(b) a communication facility other than a telephone, that permits all persons participating in the meeting to hear and speak to each other, and a person so participating is deemed to be present at that meeting.

(2) Unless this Act or the bye-laws require a meeting, a resolution of the directors may be passed without a meeting where—

(a) all the directors consent to the resolution in writing; and

(b) the consent is filed with the minutes of the proceedings of the directors.

87. Attendance at meetings

(1) A director of a co-operative society is entitled to receive notice of and to attend and be heard at every general meeting of members.

(2) Where a director—

(a) resigns;

(b) receives a notice of otherwise learns of a meeting of members called for the purpose of removing him from office; or

(c) receives a notice or otherwise learns of a meeting of directors or members at which another person is to be appointed or elected to fill his office, whether because of the director's resignation or removal or because his term of office has expired or is about to expire; the director is entitled to submit to the co-operative society a written statement giving the reason for his resignation or the reasons he opposes any proposed action or resolution.

(3) A co-operative society shall immediately send a copy of the statement mentioned in subsection

(2) to the Supervisor and shall make available a copy of the statement to every member.

(4) A co-operative society or person acting on its behalf shall not incur any liability by reason only of circulating a director's statement sent in compliance with subsection (3).

88. Organisational meeting of directors

(1) The directors shall hold a meeting within ten days after the issue of the co-operative society's certificate of registration.

(2) The directors may, at the meeting mentioned in subsection (1)—

(a) pass resolutions establishing policies of the co-operative society;

(b) adopt forms of corporate records;

(c) appoint officers;

(d) authorise the issue of securities;

(e) appoint an auditor to hold office until the first general meeting of the members;

(f) make banking or other financial arrangements;

(g) appoint authorised signing officers;

(h) adopt operating policies; and

(i) transact any other business.

(3) A director may call the meeting of directors mentioned in subsection (1) by giving not less than five days' notice of the meeting to each director, stating the time and place of the meeting.

(4) The notice mentioned in subsection (3) may be waived where all directors are in attendance at that meeting of directors.

89. Directors ceasing to hold office

(1) A director ceases to hold office when he or she—

(a) resigns;

(b) dies;

(c) fails to attend three consecutive meetings without an accepted excuse;

- (d) fails to perform any duties allotted to him as a member of the Board;
 - (e) is removed in accordance with section 90; or
 - (f) is no longer qualified in accordance with this Act.
- (2) A resignation of a director becomes effective—
- (a) with immediate effect where that person indicates to the members present at an annual general meeting that he is resigning;
 - (b) at the time specified in a written resignation; or
 - (c) where no time is specified in a written resignation, at the time the resignation is received by the co-operative society.

90. Removal of directors

- (1) Subject to the Regulations and the bye-laws, the members of a co-operative society may, by special resolution, remove any director from office.
- (2) A vacancy created by the removal of a director may be filled at the meeting of the members at which the director is removed or where not so filled, may be filled under section 72(1)(e).

91. Notice of change of directors

- (1) Within thirty days after a change is made in its directors, a co-operative society shall send to the Supervisor a notice in the prescribed form setting out the change and the Supervisor shall file the notice.
- (2) Notwithstanding subsection (1), where a co-operative society sends the annual return in accordance with section 147, within thirty days after a change is made in its directors, it is not required to send the notice required by this section.

92. Declaration by directors and officers

- A co-operative society may by resolution passed by a majority of the members at an annual or special meeting require all directors and officers to sign annually or at any other time that may be specified in the resolution a declaration relating to—
- (a) faithful performance of duties;
 - (b) secrecy of transactions with members; and
 - (c) faithful and loyal support of the co-operative society.

93. Bonding

The directors shall require that every person appointed to an office that receives, manages or handles goods, merchandise or money on behalf of the co-operative society shall give to the directors, before entering on his duties as an officer, security or a bond in such amount as they may require.

94. Remuneration of directors

- (1) A co-operative society shall not pay any remuneration directly or indirectly to a director or committee member in connection with his duties or for any service performed by that person in that capacity.
- (2) Nothing in subsection (1) shall be regarded as prohibiting the reimbursement of expenses—
- (a) which are necessarily incurred by a director or committee member in the course of performing any service on behalf, or for the benefit, of the co-operative society; and
 - (b) which are approved by a majority of the directors voting at a meeting of the Board.
- (3) Nothing in subsection (1) shall be regarded as prohibiting any director or committee member of a co-operative society, acting not as a director or committee member but in his professional capacity, from tendering for the supply of, and if successful being paid for supplying, goods or services to the co-operative society.
- (4) The directors may be granted such honorarium as—
- (a) may from time to time be approved prior to its payment, or the payment of any part thereof, by the members in general meeting; and
 - (b) does not exceed an amount recommended by the Board and approved by a general meeting of the members.
- (5) A co-operative society may purchase and maintain insurance for the benefit of a director, member of a committee, officer or employee against a liability, loss and damage incurred by that person while serving the co-operative society as a director, officer, committee member or employee.

95. Remuneration of officers and employees

Subject to section 94 and the bye-laws, the directors shall fix the salary of any employees appointed by the directors and shall approve a scale of remuneration for all employees of a co-operative society.

PART V FINANCING

96. Shares

- (1) A co-operative society may sell equity shares to its members only, but these shares shall not be withdrawn by members but shall be redeemable in accordance with the Regulations and the shares shall have a par value fixed by the bye-laws.
- (2) Unless a co-operative society is required by this Act or any other enactment to limit its number of shares it shall have an unlimited number of shares.
- (3) A share in a co-operative society is personal property and a shareholder is entitled to an annual statement showing the number of shares that he owns.

97. Share capital

- (1) A co-operative society shall express its share capital in its bye-laws as—
 - (a) an amount of money divided into a specified number of shares set out in the bye-laws; or
 - (b) an amount comprising an unlimited number of shares with a specified par value.
- (2) A co-operative society shall issue qualifying shares as well as equity shares, provided that the value of the qualifying shares and equity shares owned by the members shall not fall below the equivalent of ten per cent of the asset worth of the co-operative society as a result of any redemption of shares.
- (3) The Supervisor shall grant such period of time, not exceeding three years from the commencement of this Act, as the Supervisor considers reasonable to enable an existing society to make good any deficiency in the adequacy of its capital base.

98. Issue of shares

- (1) Subject to subsection (2), a co-operative society may issue shares at any time and for any consideration that the directors consider appropriate.
- (2) Subject to the bye-laws, a co-operative society shall sell its shares at their par value.
- (3) A member shall not be liable to the co-operative society or its creditors beyond the sum remaining unpaid on the member's subscription for shares.
- (4) A co-operative society shall not issue a share until it is fully paid—
 - (a) in money; or
 - (b) in property that, in the opinion of the directors, is the fair equivalent of the money that the co-operative society would have received if the share had been issued for money.
- (5) For the purposes of subsection (4)(b), when determining whether property is the fair equivalent of a money consideration, the directors may take into account reasonable charges and expenses of organisation and reorganisation and payment for property reasonably expected to benefit the cooperative society.
- (6) For the purposes of this section "property" does not include a promissory note or a promise to pay.

99. Alteration of authorised capital

- (1) Subject to the approval of the Supervisor a co-operative society may, by special resolution, increase or decrease its share capital and, for that purpose, may—
 - (a) subdivide any shares;
 - (b) consolidate shares into shares of a larger par value, but the par value of consolidated shares shall not be greater than one hundred dollars;
 - (c) cancel any shares that, at the date of registration of the bye-laws, have not been subscribed for or agreed to be issued and diminish the amount of its share capital by the amount of the par value of the shares so cancelled;
 - (d) extinguish or reduce the liability on any of its shares with respect to share capital not paid up;
 - (e) with or without extinguishing or reducing liability on any of its shares, cancel any paid up share capital that is lost or unrepresented by available assets; and
 - (f) with or without extinguishing or reducing liability on any of its shares and either with or without reducing the number of such shares, pay off and paid-up share capital that is greater than the requirements of the co-operative society.
- (2) The Supervisor may give his approval under subsection (1) where the Supervisor is satisfied that—
 - (a) the resolution will not contravene this Act;
 - (b) the holders of all shares of the co-operative society affected by the proposed resolution have approved the special resolution passed by the members at a general meeting called for the purpose; and
 - (c) in the case of a special resolution providing for a reduction in the share capital of the cooperative society—
 - (i) all creditors who are liable to be affected have been notified of the resolution and

have signified their approval; or
(ii) appropriate steps have been taken by the co-operative society adequately to safeguard the interests of its creditors.

100. Limitation on purchase of shares

Subject to the approval of the Supervisor, only a registered co-operative society may purchase more than one-fifth of the shares of another co-operative society where—

- (a) that other co-operative society is insolvent;
- (b) the proposed purchase or acquisition would not render the purchasing co-operative society insolvent; or
- (c) subject to paragraph (b), the proposed purchase or acquisition would not, in the opinion of the Board, be detrimental to the financial stability of the purchasing co-operative society.

101. Transfer of shares generally

(1) A share may be transferred with the approval of the Board to any person, but if the transferee is not a member, he shall be approved as a member by the Board, or by a general meeting according to the bye-laws relating to the admission of members before the transfer can be registered.

(2) If the bye-laws require a member to hold more than one share, a transferee shall acquire by the transfer, or by the transfer and allotment, the number so required to be held before the transfer can be registered.

(3) A transfer of shares shall be effected in such form as the Supervisor, upon the approval of the Commission, may determine.

(4) A transfer of a share shall not be valid and effective unless and until such transfer has been registered by the Secretary on the direction of the Board.

(5) A transfer of a share, if made by a member indebted to the co-operative society, shall not be registered without the written permission of the Board and until the transfer is registered—

- (a) a right shall not be acquired against the co-operative society by the transferee; and
- (b) a claim of the co-operative society upon the transferor shall not be affected by the transfer.

102. Transfer of shares of member of unsound mind

(1) Where a member or person claiming through a co-operative society has become of unsound mind or incapable of managing his affairs and no committee, receiver or guardian has been appointed, the co-operative society may subject to this section and section 101 transfer the share or interest of such member to any person nominated by such member for the purposes of section 106 or may pay to the person nominated a sum representing the value of the share or interest of such member ascertained in accordance with subsection (5).

(2) Subject to subsection (3), if no nominee has been appointed, the co-operative society may pay a sum representing the value of the member's share or interest to the Registrar of the High Court.

(3) If the value of the share or interest does not exceed one hundred dollars the Board may, subject to any conditions it thinks fit, pay the whole or any portion of such sum to the person who appears to have the care of the member or the management of the member's affairs.

(4) All transfers and payments made by a co-operative society in accordance with this section shall be valid and effective against any demand made upon the co-operative society by any person.

(5) For the purposes of this section and section 100, the value of any share or interest shall be represented by the sum actually paid for that share or interest by the member holding it unless the bye-laws of the co-operative society otherwise provide.

(6) Where the benefits group insurance have accrued on such share or interest, the value of such benefits shall be the amount actually received by the co-operative society on the account of such deceased member.

103. Transfer of share or interest on death of member

(1) On the death of a member of a co-operative society, where a person has been nominated by the member in accordance with section 106 and the nominee is admitted to membership of the co-operative society, the co-operative society shall within one year of the death of the member by whom the nomination was made, transfer the shares or interest of such deceased member to the nominee.

(2) On the death of a member of a co-operative society, where a person has been nominated by the member in accordance with section 106 has not been admitted to membership of the co-operative society or where the deceased member made no such nomination, the co-operative society shall within one year of the death of the member pay either to the nominee or to the legal personal representative of the deceased member,

such sum as represents the value or part thereof of the deceased member's share or interest in the co-operative society.

(3) Nothing in this section shall be construed as prohibiting a nominee who has been admitted to membership from electing to receive payment representing the value of the deceased member's shares or interest instead of accepting a transfer.

(4) Where after a period of one year there is no nominee or legal personal representative of the deceased member to which the shares or interest may be transferred or to which a sum representing the value or part thereof of the deceased member's share or interest may be paid, the share or interest shall be transferred to the development fund of the co-operative society.

(5) The shares or interest transferred under subsection (4) shall remain in the development fund for a period not less than seven years during which period it shall remain available to bona fide claimants, after which it shall constitute a part of the reserves of the co-operative society.

104. Restrictions on transfer of shares

Shares or interest or any part thereof in the capital of a co-operative society shall not be transferred unless the transfer is made to a member thereof or to a person whose application for membership has been accepted.

105. Conditions for the validity of transfer of shares

(1) Subject to the bye-laws, a transfer of shares in a co-operative society is not valid for any purpose unless—

(a) a written application for membership by the transferee is approved and the transfer is authorised by—

(i) a resolution of the directors; or

(ii) a person authorised by a resolution of the directors to approve applications and transfers of that kind; and

(b) notification of any approval given under paragraph (a) is sent to the transferee and his name has been entered on the register of members.

(2) Notwithstanding subsection (1), a transfer of a share is valid for the purpose of providing evidence of the rights of the parties to the transfer between the transferor and the transferee.

106. Power of nomination

(1) A member of a co-operative society may nominate a person or persons to or among whom there shall be transferred at his death such property in the co-operative society of which he is the owner at the time of his death, or as may subsequently have accrued thereon, whether in shares, loans or deposits, or so much thereof as is specified in such nomination if the nomination does not comprise the whole.

(2) A nomination under subsection (1) shall be made by instrument in writing signed by the member in the presence of two attesting witnesses and either delivered at or sent to the registered office of the co-operative society during the lifetime of such member or made in any book kept at the co-operative society's registered office.

(3) A member of the co-operative society may nominate more than one person only if he holds more than one share.

(4) A nomination made under subsection (1) may be revoked or varied by a subsequent nomination, or by a similar document in the nature of a revocation or variation, signed, attested and delivered, and sent or made in accordance with subsection (1), but any such nomination may not be revoked or varied by the will of the nominator or by a codicil thereto.

(5) All nominations and all revocations or variations received by a co-operative society shall be maintained in a separate record kept at the registered office of the co-operative society.

PART VI

BUSINESS OF CO-OPERATIVE SOCIETY

107. Marketing of produce through the co-operative society

(1) A co-operative society which has as one of its objects the marketing of any article of produce obtained by the work or industry of its members may by its bye-laws or otherwise contract with its members—

(a) that every such member who produces any such article shall market the whole or any specified amount, portion or description thereof to or through the co-operative society; and

(b) that any member who is proved or adjudged to have contravened the bye-laws or to have acted in breach of the contract shall pay to the co-operative society liquidated damages in a sum ascertained or assessed in such a manner as may be prescribed in the bye-laws.

(2) A contract entered into under this section shall not be questioned in any court on the ground only that it is a contract in restraint of trade.

108. Creation of charge in favour of a co-operative society

(1) A person to whom money has been lent by a co-operative society or who is otherwise indebted to the co-operative society may be required to create a charge in favour of the co-operative society in such form as may be prescribed in the Regulations.

(2) A charge shall so long as it continues in force confer on the co-operative society—

(a) authorising the chargee to seize the property subject to the charge, to take possession of any such property so subject;

(b) after an interval of five clear days, or such less time as may be specified in the charge, from the date of taking possession of any property subject to the charge, to sell such property either by auction or, if the charge so provides, by private treaty, either for a lump sum or for payment by instalments; and

(c) to apply the proceeds of sale in or towards discharge of the debt secured by the charge and the costs of seizure and sale, and to pay any surplus of such proceeds to the member whose property was sold.

(3) A charge shall, so long as it continues in force, impose on the chargor an obligation to pay to the co-operative society towards the discharge of his indebtedness the proceeds of sale of any property comprised in the charge or any money received under any policy of insurance or by way of compensation in respect of any such property, except in so far as the charge otherwise allows.

(4) A charge under this section is not a bill of sale within the meaning of the Bills of Sale Act, Cap.51.

109. Execution and registration of charge.

(1) A charge created under section 108 shall be duly executed if signed by the person in quintuplicate in the presence of—

(a) the president of the co-operative society; and

(b) the secretary of the co-operative society.

(2) The secretary shall—

(a) file one copy of the charge at the registered office of the co-operative society and deliver one copy each to the Registrar of the High Court, the Supervisor of Co-operatives and the apex body; and

(b) deliver one copy to the member.

(3) The Registrar of the High Court shall keep a book known as the “Co-operative Societies Charges Book” in which the Registrar shall register every charge delivered to the Registrar by the secretary of a co-operative society, and issue to the co-operative society a certified copy of the registration.

(4) The registration of a charge under subsection (3) shall be deemed to affect with notice any person dealing with the property comprised in the charge.

(5) Where a loan or other indebtedness in respect of which a charge was created is discharged, the secretary of the co-operative society shall—

(a) cause a document to that effect to be prepared in quintuplicate, and signed by the president and secretary of the co-operative society indicating that the charge has been discharged;

(b) file one copy of such document, deliver one copy each to the Supervisor, Antigua and Barbuda Co-operative Credit Union League and the Registrar of the High Court who shall forthwith make an entry of satisfaction in the Co-operative Societies Charges Book; and

(c) deliver one copy to the member.

(6) A person may, on payment of the fee prescribed in regulations made under this Act, inspect the Co-operative Societies Charge Book and take extracts from it.

(7) A charge subsisting at the commencement of this Act in favour of a co-operative society shall be deemed to be registered in the Co-operative Societies Charges Book, and any such charge shall, without prejudice to anything contained therein, have the same force and effect as a charge created under this Act.

110. Claims unaffected by charge

Nothing in section 108 shall affect—

(a) any claim of the Government in respect of taxes or money recoverable as such or of a landlord in respect of rent or money recoverable as rent; or

(b) the rights of any prior charges or encumbrance.

111. Prior claims in favour of co-operative society

(1) Subject to any claim in respect of debt due to the Crown or to a landlord in respect of rent or any money recoverable as rent, any debt or outstanding demand owing to a co-operative society by a member or past member shall, notwithstanding anything contained in section 109, be a first charge—

(a) upon the crops or other agricultural produce whether standing or severed, raised in whole or in part with the loan from the co-operative society by such member or past member; and

(b) upon any livestock, fodder for livestock, agricultural or industrial machinery or implements, or raw materials for use in manufacture or handicraft, or building used for the purpose of agriculture or industry, fishing or fish processing equipment to or purchased by such member or past member in goods or money granted to the member by the cooperative society.

(2) A person dealing with any of the property specified in subsection (1) shall be deemed to have notice of such first charge and all such dealing shall be subject to the charge and priority created by this Act.

112. Enforcement of charge

(1) A co-operative society may enforce a charge by applying to the magistrate of the District in which the member resides or carries on business for a warrant of distress by certifying under seal to the magistrate the amount due and particulars of the property so charged and the magistrate shall issue a warrant of distress and may offer the sale of the property by public auction or private treaty.

(2) A magistrate shall have jurisdiction under subsection (1) even though the amount due exceeds the limits of jurisdiction of a magistrate specified in the Magistrates Code of Procedure Act, Cap. 255.

113. Assignment of charge

(1) A co-operative society may borrow from any other co-operative society or from any bank approved by the Supervisor on the security of a charge executed and registered in accordance with section 109 and may for this purpose assign the charge to the other co-operative society or bank.

(2) An assignment of a charge under this section shall be registered in the same manner as a charge and section 109 shall apply, subject to any necessary modifications, to an assignment so registered.

(3) An assignment of a charge when registered shall operate as a first charge in favour of the assignee subject to section 110.

(4) Where a charge is assigned to a co-operative society established with the object of facilitating the operation of other co-operative societies, the co-operative society may borrow from any bank approved by the Supervisor and for this purpose may re-assign any such charge to the bank and subsections (2) and (3) shall apply, subject to any necessary modifications, to such reassignment.

114. Bond as security for charge

(1) A co-operative society may require a member or officer to give a bond with or without sureties as additional security for the repayment of a loan.

(2) Conditions imposed on the member or officer relating to the payment of capital and interest under a charge or loan agreement shall be strictly observed and performed by the member or officer and on breach of any such condition the bond shall be forfeited forthwith.

(3) Section 113 relating to the assignment of charges shall apply subject to any necessary modifications to the assignment of bonds.

115. Lien on shares

(1) A co-operative society shall have a lien on a share or any amount outstanding to the credit of a member or his legal representative for a debt due by that member to the co-operative society.

(2) A co-operative society may enforce a lien mentioned in subsection (1) in the manner set out in its bye-laws.

(3) The Board may, in default of payment by any member indebted to a co-operative society, apply the sum paid up for the time being on any shares held by that member in or towards the discharge of the debt so due and of any expenses relating to the debt or its discharge, and the defaulting member shall cease to have any further claim in respect of such shares.

116. Deductions applied to loans and shares

The bye-laws of a co-operative society may provide that the co-operative society—

(a) may deduct an amount from the moneys it receives for the goods, products or services it has marketed, handled, or dealt in for or on behalf of a member or non-member patron; and

(b) may apply the amount prescribed in paragraph (a) towards a loan or the purchase of shares on such terms as the Board may determine.

117. Purchase of shares

- (1) Subject to section 115, a co-operative society may purchase or otherwise acquire any of its shares that—
- (a) are available for compulsory purchase under section 119; or
 - (b) are offered for sale.
- (2) A co-operative society shall pay in cash, within one year of the date of purchase, for any shares purchased under subsection (1).
- (3) A co-operative society shall pay a purchase price for a share purchased under this section equal to the par value of the share together with any dividends declared but unpaid with respect to the share.
- (4) Subject to subsection (5), where a co-operative society purchases or otherwise acquires shares issued by it, those shares shall be deemed to be cancelled.
- (5) Where the bye-laws of a co-operative society limit the number of shares, any shares of the cooperative society purchased or otherwise acquired by the co-operative society may be treated as unissued shares.

118. Prohibition on purchase of shares

- (1) Notwithstanding section 117, a co-operative society shall not purchase or otherwise acquire its shares where—
- (a) it is insolvent;
 - (b) the proposed purchase or acquisition would render it insolvent; or
 - (c) subject to subsection (2), the proposed purchase or acquisition would, in the opinion of the Board, be detrimental to the financial stability of the co-operative society.
- (2) Where a purchase or other acquisition of shares under section 117 or 119, would in the opinion of the Board, impair the financial stability of the co-operative society or would be contrary to the interest of the remaining members the Board may suspend the purchasing or acquisition of shares.
- (3) The Board may not suspend the purchase of shares under subsection (2) for a period longer than one year unless the suspension is approved—
- (a) by the Supervisor; or
 - (b) by a special resolution of the members.

119. Compulsory sale of shares

Where—

- (a) winding-up proceedings have commenced with respect to a body corporate that is a member of a co-operative society; or
- (b) a member of a co-operative society has, during a period of two years, failed to transact any business with the co-operative society, the co-operative society may, by written notice to the member, require the member to sell his shares to the co-operative society.

PART VII

PROPERTY AND FUNDS OF CO-OPERATIVE SOCIETY

120. Investment of funds

- (1) The Board shall establish written policies for investing for income the accumulated funds of the co-operative society not used in the primary business of the co-operative society, and shall ensure they are in compliance with legislative requirements.
- (2) Subject to subsections (3) and (4), the funds of a co-operative society including the reserve may be invested or deposited in—
- (a) any central credit union, central finance facility, deposit guarantee or stabilisation fund for credit unions or co-operative societies, or other co-operative society registered under this Act;
 - (b) shares or deposits in, loans to, or on the security of, any co-operative society with limited liability;
 - (c) any financial institution licensed under the Banking Act, 2005, No. 14 of 2005 or any company registered under the Insurance Act, 2007 No. 13 of 2007 ;
 - (d) any stock, debentures, funds or securities issued by the government;
 - (e) securities, the payment of interest on which is guaranteed by the government;
 - (f) securities issued in a CARICOM Member State by a company incorporated in that member state and listed by the stock exchange of a CARICOM Member State if the company has paid dividends on its shares for the preceding five consecutive years;
 - (g) securities issued in a CARICOM Member State by a credit union that is registered in a CARICOM Member State in accordance with the laws of that CARICOM Member State;
 - (h) real property but subject to the provision of section 199(5) where the co-operative society is a credit union; and
 - (i) any other manner permitted by the Supervisor as approved by the Commission.
- (3) The investments referred to in subsection (2) (d), (e), (f), (g) and (i) shall not exceed in aggregate ten per cent of the unimpaired capital of a credit union.

(4) The equity investment of a co-operative society in any entity shall be limited to twenty percent of the equity investment of that entity.

(5) A society shall not invest the funds referred to in subsection (2) in a single institution or instrument.

121. Loan by credit union

(1) The Board of a credit union or a central credit union or central co-operative society shall establish written policies for the consideration, approval and administration of loans, guarantees, advances and other forms of financial assistance as a primary service to its members.

(2) Except for a loan to another co-operative society, a loan shall not be made to a member by a cooperative society not included in subsection (1) and a loan shall not be made by a co-operative society mentioned in subsection (1) to a person who is not a member of that co-operative society.

(3) A loan shall not be made by a credit union to a director, committee member, or employee of the credit union of a sum in excess of the aggregate value of his shares, deposits and accumulated dividend and interest thereon unless adequate security is provided for the amount of the loan in excess of that value.

(4) A loan shall not be made to a director or committee member referred to in subsection (3) on any terms relating to interest rates, discounts or waivers or on any other terms more favourable than those offered to the general membership.

(5) A loan shall not be made to a director, committee member or employee referred to in subsection (3), if when combined with all other outstanding loans to persons referred to in subsection (3), the persons' business interest or the persons' immediate family it exceeds twenty per cent of the credit union's net worth.

(6) Unless with the prior approval of the Supervisor, a loan shall not be made by a credit union to a member or a group of related members if the loan would cause the aggregate amount of loans to the member or the group of related members to exceed ten per cent of the share capital.

(7) In accordance with section 82, a director, committee member or employee of a credit union shall declare his interest in a loan at a meeting in which the loan is to be discussed and shall not be present or be present at or participate in a meeting when his application for a loan is being considered.

(8) Any loan made in contravention of this section shall be void and shall be repaid to the cooperative society immediately.

(9) Subject to the other provisions of this section, the bye-laws of a credit union shall provide for limits on the amounts of loans to any one member or on any type of loans.

122. Prohibited loans

Subject to this Act, a co-operative society shall not, directly or indirectly, give a loan, guarantee or other means of financial assistance—

(a) to a member, director, officer, committee member or employee of the co-operative society or an associate of any such person for any purpose; or

(b) to any person for the purpose of or in connection with, the acquisition of membership of the co-operative society or the purchase of a share issued or to be issued by the cooperative society or member, where there are reasonable grounds to believe that the cooperative society is insolvent or would, after giving the financial assistance, be insolvent.

123. Receipt of loans and deposits

(1) Subject to the provisions of any bye-laws of a co-operative society made for the purpose, a co-operative society may receive loans, grants and donated capital from persons or institutions that are not members of the co-operative society for the purpose of meeting any of its obligations or discharging any of its functions under this Act.

(2) A co-operative society may by mortgage or in any other manner it deems appropriate, guarantee the repayment of any sums received by it under subsection (1).

(3) Deposits shall be accepted in the manner and form and subject to any conditions that may be prescribed in the Regulations.

124. Receipt of deposits from minors

(1) A co-operative society may receive deposits from a minor and pay to such minor such deposit together with the interest accrued thereon.

(2) Any deposit made on behalf of a minor may, together with any interest accrued thereon, be paid to the parent of the minor or, where the minor is under the care of a guardian, to such guardian for the use of the minor.

(3) The receipt of a minor or his parent or guardian for money received under this section shall be a good and sufficient discharge of the liability of the co-operative society in respect of that money.

(4) Where a person under a legal disability, other than minority, is entitled to receive money from a co-operative society such money may be paid by the co-operative society to the Registrar of the High Court to the credit of such person under such disability, and the receipt of the Registrar of the High Court or of the person under disability shall be good and sufficient discharge of the liability of the co-operative society to pay that money.

(5) The Registrar of the High Court may retain out of any money so paid to him a sum not exceeding one per cent thereof for fees of office and shall pay or apply the remainder to or for the care, maintenance, education or benefit of the person under disability.

125. Allocation of surplus

(1) Where a co-operative society realises a surplus in a financial year before it allocates among or credits to members the surplus, the directors—

(a) shall use any part of the surplus that the co-operative society will require to refund all or any part of a deficit it has previously incurred;

(b) shall establish and maintain a reserve to be known as its statutory reserves; and

(c) may provide, out of any surplus remaining after paragraphs (a) and (b) have been complied with, in the manner set out in its bye-laws for payment out of the surplus, dividends on members' equity shares.

(2) The statutory reserves required by subsection (1) (b) shall be part of the institutional capital of the co-operative society and may, subject to the approval of the Supervisor, be used in the business of the co-operative society, including unforeseen losses, unexpected shortfalls in liquid cash, capital retention, improved earnings, financing of non-earning assets, repair and maintenance and the avoidance of external borrowing.

(3) A co-operative society shall ensure that its statutory reserves and other institutional capital reserves are, at no stage, less than ten per cent of its total assets.

(4) If at the end of any financial year the amount standing to statutory reserves before any transfer under this section is less than ten per cent of total assets, the co-operative society shall transfer to statutory reserves for that year not less than twenty per cent of its surplus or such lesser sum as may be required to increase the statutory reserves to ten per cent of total assets.

(5) Where at the end of any financial year the amount standing to statutory reserves before any transfer under this section is more than ten per cent of total assets, the co-operative society may not make any transfer to statutory reserves.

(6) The Supervisor shall grant such period of time as the Supervisor considers reasonable to enable management to make good any deficiency in the adequacy of its capital base.

126. Development fund

(1) A co-operative society shall establish and maintain a development fund, which may include any existing education fund or educational reserve.

(2) A co-operative society that realises a surplus from its operations as ascertained by the annual audit shall make such annual contribution to its development fund as determined by the apex body not exceeding ten per cent of that surplus, and such fund shall be used for strengthening the capacity and growth of co-operative societies and for human resource development.

(3) Subject to subsection (4), a co-operative society's development fund shall be administered in part or in whole by the apex body in accordance with its bye-laws.

(4) Where an apex body has not been established or is not functioning as such, the development fund shall be administered by such person or body of persons as the Supervisor may determine, with the approval of the active co-operative societies.

127. Pension fund

(1) A co-operative society may establish a contributory pension fund for its servants and employees and may contribute to such fund.

(2) A pension fund established under subsection (1) shall not be considered part of the assets of the co-operative society but may be invested in such manner as may be prescribed by the bye-laws.

128. Charitable contributions

After making the prescribed payments to its statutory reserve and development fund a co-operative society may contribute to any non-profit, charitable, benevolent, community, co-operative or cultural improvement purpose.

129. Dividends or bonus

(1) Subject to this section and sections 125 and 126, any surplus may be distributed by way of dividend or bonus amongst its members in proportion to their business with the co-operative society at such rate as may be prescribed.

(2) A co-operative society shall not—

- (a) declare or pay a dividend or bonus or distribute any part of its accumulated funds before the financial statements have been certified by a qualified auditor;
 - (b) pay a dividend or make any payment on account out of profits until its institutional capital has reached a proportion of not less than ten per cent of the total assets of the cooperative society; or
 - (c) declare or pay a dividend from unrealised gains including stock grants or share grants or gains arising from asset revaluation.
- (3) A bonus based on wages or on the value of the products of a member or a bonus or patronage rebate calculated in proportion to the amount of the business done by each member with the cooperative society may be distributed periodically to the members from surplus funds after the deduction of all expenditure and after making allocation to the statutory reserves.

PART VIII

FINANCIAL DISCLOSURE AND AUDIT

130. Annual financial statement

- (1) The directors of a co-operative society shall place before the members at every annual meeting of members of the co-operative society—
- (a) comparative financial statements relating separately to—
 - (i) the period that began on the date the co-operative society came into existence and ended not more than twelve months after that date, or, if the co-operative society has completed a financial year, the period that began immediately after the end of the last period for which financial statements were prepared and ended not more than twelve months after the beginning of that period; and
 - (ii) the immediately preceding financial year;
 - (b) the report of the auditor; and
 - (c) any further information respecting the financial position of the co-operative society and the results of its operations required by the bye-laws.
- (2) The financial statements mentioned in subsection (1)(a)(ii) may be omitted if the reason for the omission is set out in the financial statement to be placed before the members or in a note attached thereto.
- (3) The financial statements referred to in subsection (1) (a) shall include the balance sheet and detailed profit and loss accounts in respect of all business transacted by the co-operative society in the financial years covered by the statements, prepared in accordance with international accounting standards and including consolidated balance sheets and profit and loss accounts in any case where the co-operative society has subsidiaries or associated companies.

131. Approval of financial statements

- (1) The directors of a co-operative society shall approve the financial statements referred to in section 130, and the approval shall be acknowledged by the signature of two or more directors.
- (2) A co-operative society shall not issue, publish or circulate copies of the financial statements referred to in section 130 unless the financial statements are—
- (a) approved and signed in accordance with subsection (1); and
 - (b) accompanied by an auditor's report and management letter from the co-operative society's auditor.
- (3) A co-operative society shall send to the Supervisor a copy of the financial statements, auditor's report and management letter referred to in section 130 within ten days of receipt of the respective documents.

132. Providing financial statements

- (1) Not less than ten days before each annual meeting of members, a co-operative society shall make available to each member a copy of the financial statements and report of the auditor referred to in section 130.
- (2) Where a co-operative society applies to the Supervisor and the Supervisor is satisfied that there are reasonable grounds, the Supervisor, upon the approval of the Commission, may excuse the co-operative society from complying with subsection (1).

133. Auditor's qualifications

Subject to section 134, a co-operative society's auditor shall be a member of a recognised professional body satisfactory to the Supervisor and qualified to conduct audits.

134. Disqualifying auditor

- (1) Subject to subsection (7), an individual shall not be qualified to be an auditor of a co-operative society if he is not independent of the co-operative society and its member co-

operative societies, and of the directors and officers of the co-operative society and its member co-operative societies.

(2) For the purposes of this section whether or not an individual is independent is a question of fact to be determined having regard to all the circumstances.

(3) An individual shall be presumed not to be independent of a co-operative society if he or his business partner—

(a) is a member, a director, an officer or an employee of the co-operative society or any of its member co-operative societies or a business partner or employee of any director, officer, member or employee of any such co-operative society, or its member co-operative societies;

(b) is a member of a credit committee or any other committee of the co-operative society or any of its member co-operative societies;

(c) transacts a substantial amount of business with the co-operative society or any of its member co-operative societies.

(d) if a chief executive officer, chief financial officer, chief accounting officer, or any person serving in an equivalent position for the co-operative society was employed by that individual and participated in any capacity in the audit of that co-operative society during the one year period preceding the date of the initiation of the audit; or

(e) provides to the co-operative society contemporaneously with the audit, any non-audit service including—

(i) bookkeeping or other services relating to the accounting records or financial statements of the co-operative society;

(ii) financial information systems design and implementation;

(iii) appraisal or valuation services, fairness opinions, or contributions-in-kind reports;

(iv) actuarial services;

(v) internal audit outsourcing services;

(vi) management functions or human resources;

(vii) broker, dealer or investment adviser services;

(viii) legal services and expert services unrelated to the audit; or

(ix) any other service that the Supervisor determines is not permissible.

(4) The provision of professional advice by or on behalf of an individual or his business partner shall not by itself deprive an individual or his business partner of his independence for the purposes of this section.

(5) An auditor who becomes disqualified under this section or has been replaced or whose term has expired shall immediately notify the Supervisor in writing and state the reasons for termination of his appointment.

(6) A member of a co-operative society may apply to the Supervisor for an order or the Supervisor may, upon its own motion, make an order declaring an auditor disqualified under this section and the office of auditor vacant.

135. Appointment of auditor

(1) Subject to subsection (4), the members of a co-operative society shall—

(a) at the first general meeting, appoint an auditor to hold office until the close of the first annual general meeting; and

(b) at each annual meeting, appoint an auditor to hold office until the close of the next annual general meeting.

(2) Notwithstanding subsection (1) (b), if an auditor is not appointed at an annual meeting, the incumbent auditor shall continue in office until his successor is appointed at a subsequent meeting.

(3) The remuneration of an auditor shall be specified by the Board.

(4) An individual shall not accept appointment, consent to be appointed or be appointed as auditor of a co-operative society if he is replacing an auditor who has resigned, been removed or whose term of office has expired or is about to expire, until the individual has requested or received from the former auditor a written statement of the circumstances and reasons why, in the auditor's opinion, the auditor is to be replaced.

(5) Notwithstanding subsection (4), an individual otherwise qualified may accept appointment or consent to be appointed as auditor of a co-operative society if, within twenty-one days of making the request referred to in that subsection, the individual does not receive a reply to it.

(6) An auditor shall not assume office unless he has confirmed in writing to the co-operative society his willingness to serve as auditor.

136. Cessation of office

(1) An auditor of a co-operative society ceases to hold office when he or she—

(a) resigns by giving written notice to the co-operative society;

(b) is removed under section 137; or

(c) has held the office for five consecutive years.

(2) The resignation of an auditor shall become effective at the time his written resignation is sent to the co-operative society, or at the time specified in the resignation, whichever is the later date.

(3) The cooperative society shall notify the Supervisor in writing of the resignation of an auditor under subsection (1) within seven days of receipt of the resignation.

137. Removal of auditor

The members of a co-operative society may, by ordinary resolution at a special meeting remove an auditor other than an auditor appointed by the Supervisor under section 139.

138. Filling vacancy of auditor

(1) Subject to subsection (4), the directors shall immediately fill a vacancy in the office of auditor.

(2) If there is not a quorum of directors, the directors then in office shall, within twenty-one days after a vacancy in the office of auditor occurs, call a special meeting of members to fill the vacancy.

(3) Where the directors fail to call a meeting under subsection (2) or where there are no directors, a meeting for the purpose of filling a vacancy in the office of auditor may be called by any member.

(4) The bye-laws of a co-operative society may provide that a vacancy in the office of auditor be filled only by vote of the members.

(5) An auditor appointed to fill a vacancy shall hold office for the unexpired term of his predecessor.

139. Auditor appointed by Supervisor

If a co-operative society does not have an auditor, the Supervisor may, upon the Supervisor's own motion and shall, upon the application of a member, appoint and specify the remuneration of an auditor, and the auditor shall, subject to section 133, hold office until an auditor is appointed in accordance with section 135.

140. Auditor's right to notice

The auditor of a co-operative society is entitled to receive notice of every annual general meeting of the members of the co-operative society, and to be heard in presenting his report at the meeting.

141. Required notice

If a member of a co-operative society who is entitled to vote at a meeting of members, or a director of a co-operative society, gives written notice to the auditor or a former auditor of the co-operative society, not less than ten days before a meeting of members of the co-operative society, to attend the meeting, the auditor or former auditor shall attend the meeting at the expense of the cooperative society and answer questions relating to his duties as an auditor or former auditor.

142. Auditor's right to comment

(1) An auditor who—

(a) resigns;

(b) receives a notice or otherwise learns of a meeting of members called for the purpose of removing the auditor from office; or

(c) receives a notice or otherwise learns of a meeting of members or directors at which another person is to be appointed to fill the office of auditor, whether because of the resignation or removal of the incumbent auditor or because the auditor's term of office has expired or is about to expire, may submit to the co-operative society and to the Supervisor a written statement giving the reason for his resignation or the reasons why he opposes any proposed action.

(2) When it receives a statement referred to in subsection (1), the co-operative society shall immediately send a copy of the statement to every member entitled to receive notice of any meeting of members and to the Supervisor.

143. Examination by auditor

(1) The auditor of a society shall examine its books and records and shall make a report upon the annual financial statements and financial position to be placed before the members, and in every such report the auditor shall state whether in the auditor's opinion the balance sheet and income and expenditure account give a true and fair view of the state of affairs of the society and of its results for the period then ended and submit any additional information in relation to the audit of the society as the board or the Supervisor considers necessary.

(2) It shall also be the duty of the auditor to certify whether the appropriate measures to counter money laundering and terrorism are in place.

144. Auditor's right to inspect

(1) Upon the demand of an auditor of a co-operative society the present or former directors, officers, employees or agents of the co-operative society shall provide to the auditor—

(a) such information and explanations; and

(b) such access to records, documents, books, accounts and vouchers of the co-operative society; as are in the opinion of the auditor, necessary to enable the auditor to make the examination and report required under section 143 and that the directors, officers, employees or agents are reasonably able to provide.

(2) Upon the demand of the auditor of a co-operative society, the directors of the co-operative society shall—

(a) obtain from the present or former directors, officers, employees or agents of any member of the co-operative society, the information and explanations that the directors, officers, employees and agents are reasonably able to provide and that are, in the opinion of the auditor, necessary to enable the auditor to make the examination and report required under section 143; and

(b) provide the information and explanations so obtained to the auditor.

(3) A former or present director, committee member, employee or agent of any member of a cooperative society, shall not take any action fraudulently to influence, coerce, manipulate or mislead an independent auditor in the performance of an audit of the financial statements of a co-operative society for the purpose of rendering such financial statements materially misleading.

(4) A former director, officer, employee or agent of a member who contravenes subsection (2) or (3) commits an offence and is liable on summary conviction—

(a) in the case of a first offence to a fine not exceeding twenty five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding three months or to both;

(b) in the case of a subsequent offence to a fine not exceeding forty thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both.

145. Error or misstatement

(1) A director or an officer of a co-operative society shall forthwith notify the co-operative society's auditor of any error or misstatement of which the director or officer becomes aware in a financial statement upon which the auditor or former auditor has reported.

(2) When the auditor or a former auditor of a co-operative society is notified or becomes aware of an error or misstatement in a financial statement upon which he has reported to the co-operative society and in his opinion, the error or misstatement is material, he shall inform each director of the co-operative society accordingly.

(3) When under subsection (2) the auditor or a former auditor of a co-operative society informs the directors of an error or misstatement in a financial statement of the co-operative society, the directors shall—

(a) prepare and issue revised financial statements; or

(b) otherwise inform the members and the Supervisor of the error or misstatement.

146. Privilege of auditor

An auditor shall not be liable to any person in an action for defamation based on any act done or not done, or any statement made by him in good faith in connection with any matter he is authorised or required to do under this Act.

147. Annual, monthly and special returns

The Co-operative Societies Act, 2010. (1) Not less than ten days, or such shorter period as the Supervisor may allow, before the next annual meeting of a co-operative society shall—

(a) file with the Supervisor, an annual return for the previous year, on the form provided by the Supervisor; and

(b) provide the Supervisor with a copy of the financial statement to be placed before its members at its next annual meeting.

(2) Within thirty days of the end of each month, a co-operative society shall file a monthly return with the Supervisor in accordance with the Regulations.

(3) The Supervisor may, by notice in writing, require a co-operative society, director or officer of a co-operative society to make a special return on any subject connected with the business and affairs of the co-operative society including on risk focused information, prudential reports, quarterly reports of large credit exposures, non-performing loans, investments, assets and liabilities, variance reports.

(4) Where the Supervisor requests a special return under subsection (3), the Supervisor shall specify in the notice a time within which the special return is to be made.

PART IX

RECONSTRUCTION OF CO-OPERATIVE SOCIETIES

148. Methods of reconstruction

- (1) The reconstruction of a co-operative society is subject to the approval of the Supervisor and may be effected by—
- (a) the amalgamation of one co-operative society with another co-operative society to form a single co-operative society;
 - (b) the transfer of the assets and liabilities of one co-operative society to another co-operative society; or
 - (c) the division of a co-operative society into two or more co-operative societies.
- (2) Sections 151 to 154 shall have effect with respect to the procedure that shall be followed in relation to subsection (1).

149. Conversion

- (1) A company registered under the Companies Act, 1995, No. 18 of 1995 or a registered industrial, provident or friendly co-operative society may, by special resolution, determine to convert itself into a co-operative society.
- The resolution for conversion into a co-operative appoint ten members of the company or the industrial, provident or friendly co-operative society who together with the secretary, shall sign the proposed bye-laws and who may, by resolution, be given such powers to act on behalf of the company or the industrial, provident or friendly cooperative society as may be specified in such resolution.
- (3) A copy of the special resolution referred to in subsection (1) with three copies of the bye-laws shall be sent to the Supervisor who may, upon receipt thereof, register the co-operative society and issue a certificate in accordance with section 16.

150. Effect of certificate of registration

- (1) On the date of the certificate of registration issued under section 149—
- (a) the incorporation or registration under any other enactment of the company or the industrial, provident or friendly co-operative society shall cease and shall be cancelled by the proper officer;
 - (b) the conversion of the company or the industrial, provident or friendly co-operative society shall be effective;
 - (c) the property of the company or the industrial, provident or friendly co-operative society shall become the property of the co-operative society;
 - (d) the co-operative society shall be liable for the obligations of the company or the industrial, provident or friendly co-operative society;
 - (e) an existing cause of action, claim or liability or prosecution against the company or the industrial, provident or friendly co-operative society shall not be affected;
 - (f) a civil, criminal or administrative action pending against a converted company or an industrial, provident or friendly co-operative society may be continued against the registered co-operative society; and
 - (g) a conviction against or a ruling, order or judgment in favour of or against a company or an industrial, provident or friendly co-operative society may be enforced by or against the registered co-operative society.
- (2) An obligation or penalty arising under any of the matters mentioned in subsection (1) for which the former company, or industrial, provident or friendly co-operative society is liable or potentially liable at the date of the certificate of registration issued under section 149 shall have priority as against the property of the registered co-operative society over all other rights or claims against, or liabilities of the registered co-operative society.

151. Amalgamation of co-operative societies

- (1) Any two or more co-operative societies may, by a resolution passed by not less than three-fourths of all the members of each co-operative society present and voting at a special general meeting called for the purpose, amalgamate as one co-operative society.
- (2) Where a resolution referred to in subsection (1) is passed, each such co-operative society shall apply to the Supervisor for cancellation of its registration and the co-operative societies shall jointly make application for the registration of the amalgamated co-operative society.
- (3) The registration of the amalgamated co-operative society shall be sufficient to vest the assets and liabilities of the amalgamating co-operative societies in the amalgamated co-operative society.

152. Transfer of assets of co-operative societies

- (1) Any co-operative society may, by resolution passed by not less than three-fourths of all the members present and voting at a special general meeting called for the purpose, agree

to transfer its assets and liabilities to any other co-operative society which has agreed to accept them.

(2) The acceptance of that other co-operative society shall be by a resolution passed by not less than three-fourths of the members of that other co-operative society present and voting at a special general meeting called for the purpose.

(3) On the passing of the resolutions referred to in subsections (1) and (2), the transferor cooperative society shall apply to the Supervisor for cancellation of its registration and the transferee co-operative society shall submit to the Supervisor a copy of the transferee co-operative society's resolution agreeing to the transfer.

(4) Subject to subsection (5), the cancellation of registration and the submission of the resolution agreeing to accept the transfer shall be sufficient to vest the assets and liabilities of the transferor to the transferee.

(5) Where the vesting of the assets of a co-operative society involves real estate, a copy of the resolution referred to in subsection (1), certified as such by the Supervisor, the resolution shall be recorded at the Land Registry.

153. Claims of objecting creditors

Notwithstanding sections 151 and 152 an amalgamation or transfer shall not be effected unless the creditors of the co-operative societies concerned are given three months' written notice of the proposal and have signified that they have no objections.

154. Division of co-operative society

(1) A co-operative society may, by resolution in this section referred to as a "preliminary resolution" passed by three-fourths of the members present and voting at a special general meeting called for the purpose, resolve to divide itself into two or more co-operative societies.

(2) A preliminary resolution—

(a) shall contain proposals for the division of the assets and liabilities of the co-operative society among the new co-operative societies into which it is proposed to divide the cooperative society; and

(b) may specify the area of operation of, and the members who will constitute each of the new co-operative societies.

(3) A copy of the preliminary resolution shall be sent to the Supervisor and all members and creditors of the co-operative society that is being divided.

(4) At least ten days notice of the preliminary resolution shall be given to any person whose interest will be affected by the division of the co-operative society, and by publishing the notice in the *Gazette* and in at least two issues of a newspaper published and circulated in Antigua and Barbuda.

(5) A member of a co-operative society may, notwithstanding any bye-law to the contrary, by notice given to the co-operative society within a period of three months from his receipt of the preliminary resolution, state his intention not to become a member of any of the new co-operative societies.

(6) A creditor of the co-operative society may, notwithstanding any agreement to the contrary, by notice given to the co-operative society within a period of three months from his receipt of the preliminary resolution, state his intention to demand the payment of moneys due him or her.

(7) Any person, other than a member or creditor, whose interest may be affected by the division of a co-operative society may, by notice given to the co-operative society, object to the division unless his claim is satisfied.

(8) After the expiry of three months from the receipt of the preliminary resolution by all the members and creditors of the co-operative society and of the notice to other person given under subsection (4), another special general meeting of the co-operative society, of which at least fifteen days notice shall be given to its members, shall be convened for the consideration of the preliminary resolution.

(9) If at the special general meeting referred to in subsection (8) the preliminary resolution is confirmed by a special resolution either without changes or with such changes as in the opinion of the Supervisor are not material, the Supervisor may, upon the approval of the Commission and subject to subsection (11) and section 16, register the new co-operative societies; and upon registration, the original co-operative society shall be taken to be dissolved and its registration cancelled.

(10) The decision of the Supervisor, as approved by the Commission, as to whether any changes made in the preliminary resolution are material shall be final and not subject to any appeal.

(11) At the special general meeting referred to in subsections (8) and (9) provision shall be made for

(a) repayment of the share capital of all the members who have given notice under subsection (5);

(b) satisfaction of the claims of all the creditors who have given notice under subsection (6); and

(c) satisfaction of the claims of such of the other persons, who have given notice under subsection (7), but no member or creditor or other person shall be entitled to such repayment or satisfaction until the preliminary resolution is confirmed in accordance with subsection (9).

(12) Where within such time as the Supervisor considers reasonable-

(a) the share capital of the members referred to in subsection (11) (a) is not repaid;

(b) the claims of the creditors referred to in that subsection are not satisfied; or

(c) the claims of the other persons mentioned in subsection (11) (c) are not satisfied or secured, the Supervisor may refuse to register the new co-operative societies.

155. Effect of registration of new co-operative societies

The registration of new co-operative societies established under section 154 is sufficient to vest the assets and liabilities of the original co-operative society in the manner specified in the preliminary resolution as confirmed in accordance with section 154(8) and (9).

PART X

RECEIVERS AND RECEIVER-MANAGERS

156. Appointment of receiver or receiver-manager

(1) Where, in the opinion of the Supervisor or the High Court, based on the results of an examination undertaken under section 186, it is necessary to appoint a receiver or a receiver-manager to protect the equity of the members, the Supervisor, upon the approval of the Commission or the High Court may appoint a receiver or a receiver-manager.

(2) An appeal shall lie to the Court of Appeal against the appointment of a receiver or receiver manager by the Supervisor within ten days of the appointment.

157. Functions of receiver

(1) Subject to the rights of secured creditors, a receiver of any property of a co-operative society No.m 9a oyf—

(a) receive the income from the property and pay the liabilities connected with the property; and

(b) realise the security interest of those on whose behalf the receiver is appointed.

(2) Notwithstanding subsection (1) and subject to any order that the Court may make under section 161, a receiver who is not appointed as manager of a co-operative society shall not carry on the business of the co-operative society.

158. Functions of receiver-manager

(1) Where a receiver of a co-operative society is also appointed manager of the co-operative society, the receiver may carry on any business of the co-operative society to protect the equity of the members.

(2) A receiver or receiver-manager appointed under section 156 shall be discharged by the Court or Supervisor, upon the approval of the Commission if in the opinion of the Court or Supervisor the equity of the members has been sufficiently protected as to enable the society to be returned to its members.

159. Cessation of Board's powers

Where a receiver or receiver-manager is appointed under section 156 no directors of the co-operative society shall exercise the directors' powers that the receiver or receiver-manager is authorised to exercise until the receiver or receiver-manager is discharged.

160. Duty of receiver or receiver-manager

(1) A receiver or receiver-manager appointed by a Court shall act in accordance with any directions of the Court.

(2) A receiver or receiver-manager appointed by the Supervisor as approved by the Commission shall act in accordance with all directions given by the Supervisor that are approved by the Commission.

(3) A receiver or receiver-manager shall—

(a) act honestly and in good faith, and

(b) deal with any property of the co-operative society in his possession or control in a commercially reasonable manner.

161. Directions by court

Upon an application by a receiver or a receiver-manager of a co-operative1 s0o2ciety, whe tNheor. 9ap opfoi2n0t1e0d by the Court or the Supervisor in accordance with section 156, the Court may make any order it thinks fit, on any matter including—

- (a) appointing, replacing or discharging a receiver or receiver-manager and approving his accounts;
- (b) determining the notice to be given to any person or dispensing with notice to any person;
- (c) fixing the remuneration of the receiver or receiver-manager;
- (d) requiring the receiver or receiver-manager—
 - (i) to make good any default in connection with his custody or management of the property and business of the co-operative society; and
 - (ii) to relieve the receiver or receiver-manager from any default on any terms that the court considers appropriate;
- (e) confirming any act of the receiver or receiver-manager; and
- (f) giving directions on any other matter relating to the duties of the receiver or receiver manager.

162. Directions by Supervisor

- (1) Where a receiver or a receiver-manager is appointed by the Supervisor under section 156 the receiver or receiver-manager may apply to the Supervisor for directions on any matter relating to his duties.
- (2) Where the Supervisor receives an application under subsection (1), he may make any order he considers appropriate, including any other similar to an order described in sections 161(c) to (f).
- (3) An order made under subsection (2) is subject to the approval of the Commission.

163. Required actions of receiver

A receiver or receiver-manager shall—

- (a) in the case of a receiver or receiver-manager appointed by the Court, immediately notify the Supervisor of his appointment or discharge;
- (b) take into his custody and control the property of the co-operative society in accordance with the Court order or the order of the Supervisor under which he is appointed;
- (c) open and maintain a bank account in his name as receiver or receiver-manager of the moneys of the co-operative;
- (d) keep detailed accounts of all transactions carried out by him as receiver or receivermanager;
- (e) keep accounts of his administration that he shall cause to be available during usual business hours for inspection by the directors of the co-operative society, the Supervisor or any person authorised by the Supervisor;
- (f) prepare at least once in every six-month period after the date of his appointment financial statements of his administration, as far as is practicable in the form required in section 130;
- (g) on completion of his duties, render a final account of his administration in the form he has adopted for preparation of interim accounts under paragraph (f); and
- (h) file with the Supervisor a copy of any financial statement mentioned in paragraph (f) and any final account mentioned in paragraph (g) within fifteen days of the preparation of the financial statement or rendering of the final account.

PART XI DISSOLUTION

164. Dissolution by members

- (1) Subject to the approval of the Supervisor, whose approval is subject to that of the Commission, the members of a co-operative society may authorise the dissolution of the co-operative society.
- (2) The Board shall cause a notice of a special meeting of members to be sent in the manner prescribed in section 46 to each member for the purpose of authorising dissolution.
- (3) Each member of the co-operative society has the right to vote with respect to dissolution.
- (4) For the purpose of subsection (1) dissolution is authorised when the members approved the dissolution by a special resolution of the membership.
- (5) Where the Supervisor —
 - (a) receives notice, in a form satisfactory to it, of an authorisation to dissolve a co-operative society; and
 - (b) is satisfied that it is in the best interest of the co-operative society and its members, the Supervisor, upon the approval of the Commission, shall approve the dissolution.
- (6) The authorisation approved under subsection (4) shall set out—
 - (a) the assets and liabilities of the co-operative society;
 - (b) the claims of any creditors;
 - (c) the number of members; and

- (d) the nature and extent of the members' interest in the co-operative society.
- (7) Subject to subsection (9), where a co-operative society has an unallocated surplus and the authorisation approved under subsection (4) states that it is not to be paid out at the time of the cooperative society's dissolution, the unallocated surplus shall be paid to one or more trustees who are—
- (a) named in the special resolution; or
 - (b) where not named in the special resolution, appointed by the Supervisor, and approved by the Commission.
- (8) The trustees named or appointed pursuant to subsection (7) shall—
- (a) deposit the money in a special trust account—
 - (i) in a co-operative society; or
 - (ii) in any financial institution licensed under the Banking Act 2005, No. 14 of 2005 or any company registered under the Insurance Act, 2007 No. 13 of 2007; or
 - (b) invest the money in—
 - (i) securities issued by the Government;
 - (ii) securities the payment of interest on which is guaranteed by the government; or
 - (iii) any other manner authorised by the Supervisor as approved by the Commission.
- (9) Where a trust is created under subsection (7), the income and principal of the trust shall be expended within a period of twenty years from the date that the trust was established for any cooperative purpose the Supervisor considers fit.
- (10) In this section—
- (a) "interest" includes the interest of a member in a co-operative society and includes member loans and obligations of any kind that—
 - (i) arise by virtue of the bye-laws of the co-operative society; and
 - (b) "unallocated surplus" includes any net proceeds from the sale of assets on dissolution of the co-operative society after the liabilities of the co-operative society and the claims of creditors and members have been satisfied.

165. Notice of dissolution by members

- (1) When the Supervisor approves a special resolution passed under section 164, the Supervisor shall, at the expense of the co-operative society, cause a notice of the special resolution to be published—
- (a) in the *Gazette*; and
 - (b) once a week for two weeks in a newspaper published and circulated in Antigua and Barbuda.
- (2) Notwithstanding subsection (1), where the Supervisor receives an affidavit from the officers of a co-operative society stating that the co-operative society has no assets and no liabilities and it is satisfied that it is appropriate, the Supervisor, upon the approval of the Commission may—
- (a) exempt the co-operative society from subsection (1); and
 - (b) cause, at the expense of the Financial Services Regulatory Commission, a notice of the special resolution passed under section 164(1) to be published in the *Gazette*.
- (3) The Supervisor shall require from a co-operative society, liquidator or trustee appointed by a co-operative society or any other person who is required to provide information, an annual or other return showing-
- (a) the progress of dissolution;
 - (b) the distribution of any undistributed surplus or reserve;
 - (c) the progress of the administration of a trust established in accordance with this section; and
 - (d) any other information that it may require.

166. Dissolution by Supervisor

- (1) Where the Supervisor has reasonable cause to believe that a co-operative society—
- (a) has not commenced business within twelve months after the date shown on its certificate of registration; or
 - (b) has not carried on business for twelve consecutive months, the Supervisor shall send to the secretary of the co-operative society a letter inquiring whether the cooperative society is carrying on business, is in operation or is submitting an annual return.
- (2) Where the Supervisor does not, within one month of the date it sent a letter under subsection (1), receive an answer to the letter, the Supervisor shall, within fourteen days after the expiry of the month, send to the secretary of the co-operative society a letter referring to the letter sent under subsection (1) and stating that—
- (a) no answer to that letter has been received by the Supervisor; and
 - (b) if an answer is not received to the letter sent under this subsection within one month from the date it is sent, a notice will be published in the *Gazette* to strike the name of the cooperative society off the Register and to dissolve the co-operative society.
- (3) Where the Supervisor—

- (a) receives an answer from a co-operative society that it is not carrying on business or is not in operation or will not be submitting an annual return; or
- (b) does not, within one month after the date that the Supervisor sent a letter under subsection (2), receive an answer to that letter, the Supervisor shall publish in the Gazette and send to the co-operative society a notice that, at the expiry of one month from the date of that notice, the co-operative society will, unless cause is shown to the contrary, be struck off the register and the co-operative society will be dissolved.
- (4) At the expiry of the period mentioned in a notice sent under subsection (3), the Supervisor shall, unless cause to the contrary is previously shown by the co-operative society—
 - (a) where the Supervisor is satisfied that the co-operative society has no assets or liabilities, issue a certificate of dissolution in the prescribed form; or
 - (b) appoint a liquidator to dissolve the co-operative society.

167. Dissolution for failure to account for business transacted

- (1) Where a co-operative society fails to provide a copy of the annual financial statements to its members at an annual or special meeting called for that purpose or within a period of twelve months after the close of its financial year, the Supervisor—
 - (a) may require the directors to call a special meeting of the co-operative society for the purpose of considering the business transacted during the preceding financial year and for the providing to the members and to the Supervisor a copy of the annual financial (b) shall, where the Supervisor requires a special meeting to be called under paragraph (a), determine a time period within which the special meeting is to be called.
- (2) Where the directors fail to call a special meeting within the time period set out in subsection (1), the Supervisor may call the special meeting—
 - (a) to review the financial position of the co-operative society and the members' interests in the co-operative society; and
 - (b) to ascertain whether the members wish to continue the business of the co-operative society and to comply with sections 130 and 132.
- (3) Where—
 - (a) a quorum of members is not present at a special meeting called under subsection (2); or
 - (b) the members fail to pass a resolution to the effect that the co-operative society is to carry on business and to comply with sections 130 and 132, the Supervisor shall notify the directors that, unless sections 130 and 132 are complied with within one month from the date of the notice, the co-operative society will be struck off the register and dissolved.
- (4) Notwithstanding subsection (3), the Supervisor may extend the period for compliance with sections 130 and 132.
- (5) Where a co-operative society does not comply with sections 130 and 132 within the period mentioned in subsection (3) or set by the Supervisor under subsection (4) the Supervisor shall—
 - (a) where the Supervisor is satisfied that the co-operative society has no assets or liabilities, issue a certificate of dissolution in the prescribed form; or
 - (b) appoint a liquidator to dissolve the co-operative society.

168. Dissolution by Court

- (1) The Supervisor or an interested person may, after giving the co-operative society three months notice of the proposed application, apply to the Court for an order dissolving a co-operative society, if the co-operative society—
 - (a) obtained its registration by fraud or mistake;
 - (b) exists for an illegal purpose;
 - (c) has wilfully, after notice by the Supervisor, violated any of the provisions of this Act or its bye-laws;
 - (d) is no longer operating on co-operative principles; or
 - (e) has the number of its members reduced below the minimum number required by this Act for the co-operative society.
- (2) Where an interested person applies under this section, he shall give the Supervisor notice of his application and the Supervisor shall be entitled to appear and be heard and represented either by a member of staff of the Supervisor or by an attorney-at-law.
- (3) Where the Court receives an application under this section, the Court may order that the cooperative society be dissolved or liquidated and dissolved under the supervision of the Supervisor.
- (4) Where the Supervisor receives an order made under subsection (3), the Supervisor shall—
 - (a) where the order is to dissolve the co-operative society, issue a certificate of dissolution in the prescribed form; or

(b) where the order is to liquidate and dissolve the co-operative society under the supervision of the Supervisor, publish a notice in the *Gazette*.

169. Revival of dissolved co-operative society

(1) Where a co-operative society has been dissolved under this Part, any interested person may apply to the Supervisor to have the co-operative society revived by submitting to the Supervisor—

(a) an application for revival in such form as the Supervisor may approve; and

(b) such other information as the Supervisor may require.

(2) Where the Supervisor receives an application for revival under subsection (1) and the Supervisor is satisfied that the co-operative society is in compliance with this Act, the Supervisor may—

(a) issue a certificate of revival in the prescribed form and publish notice of the revival in the *Gazette*; and

(b) impose any conditions on the co-operative society that it considers reasonable with respect to the co-operative society.

(3) A co-operative society is revived on the date shown in the certificate of revival.

(4) Where a co-operative society is revived under this section, it—

(a) shall have all the rights and privileges; and

(b) shall be liable for the obligations; that it would have had if it had not been dissolved, subject to any terms that may be imposed by the Supervisor and to any rights acquired by any person after its dissolution.

170. Appointment of liquidator

(1) Where—

(a) a co-operative society is to be dissolved under this Part; or

(b) no liquidator is appointed by the members or the Court;

the Supervisor, upon the approval of the Commission, may appoint a liquidator to wind up the affairs of the co-operative society.

(2) Notwithstanding subsection (1) where the Supervisor is satisfied that the co-operative society has no assets and liabilities, he may issue a certificate of dissolution in the prescribed form.

171. Commencement of liquidation

The liquidation of a co-operative society commences where—

(a) a special resolution for dissolution of the co-operative society is approved by the Supervisor under section 164;

(b) the Supervisor appoints a liquidator under section 166 or 167;

(c) the Court makes an order to dissolve under section 168; or

(d) the registration of a co-operative society is cancelled by the Supervisor under this Act.

172. Cessation of business

(1) From the date of the commencement of its liquidation—

(a) a co-operative society continues in existence, but shall cease to carry on its business except insofar as may be required, in the opinion of the liquidator, for an orderly liquidation; and

(b) any transfer of shares, other than a transfer made to or with the approval of the liquidator, and any alteration in the status of the members made after commencement of the liquidation shall be void.

173. General provisions respecting liquidators

(1) Where two or more liquidators are appointed, all the provisions in this section with respect to a liquidator apply to all of the liquidators.

(2) On the appointment of a liquidator under this Part, all the powers of the directors vest in the liquidator.

(3) A liquidator may delegate any of the powers vested in him under subsection (2) to the directors or members.

(4) Where the members of a co-operative society appoint a liquidator, they may, at that time or at a subsequent general meeting, pass a resolution giving direction to the liquidator with respect to the disposal of the property of the co-operative society.

(5) Where—

(a) the members appoint a liquidator and do not issue direction under subsection (4); or

(b) a liquidator is not appointed by the members, the liquidator is subject to the directions, orders and instructions of the Supervisor as approved by the Commission, with respect to the mode and terms and conditions on which the liquidator may dispose of the whole or any part of the property of the co-operative society.

(6) Where a vacancy in the office of liquidator occurs, the Supervisor upon the approval of the Commission may appoint another person to fill the vacancy.

(7) In all proceedings connected with the co-operative society, the liquidator is to be described as the liquidator of the co-operative society and not by his individual name only.

174. Duties of liquidator

On his appointment, a liquidator shall—

- (a) immediately give notice of his appointment—
 - (i) in the case of a liquidator not appointed by the Supervisor under section 170, to the Supervisor; and
 - (ii) to each claimant and creditor known to the liquidator;
- (b) immediately publish notice of his appointment in the Gazette and once a week for two consecutive weeks in a newspaper published andT chierc Culoa-toepde irna Ativnet iSgoucai eatnides B Aacrbt,u 2d0a1;
- (c) set out in the notice mentioned in paragraphs (a) and (b) a provision requiring any person—
 - (i) indebted to the co-operative society, to render an account and pay to the liquidator at the time and place specified;
 - (ii) possessing property of the co-operative society, to deliver it to the liquidator at the time and place specified; and
 - (iii) having a claim against the co-operative society, whether liquidated, unliquidated, future or contingent, to present particulars of the claim in writing to the liquidator not later than two months after the first publication of the notice;
- (d) take into his custody and control the property of the co-operative society;
- (e) open and maintain a trust account for the monies of the co-operative society;
- (f) maintain separate lists of the members, creditors and other person having claims against the co-operative society;
- (g) where at any time the liquidator determines that the co-operative society is unable to pay or adequately provide for the discharge of its obligations, apply to the Supervisor for directions; and
- (h) deliver to the Supervisor and the co-operative society, at least once in every twelvemonth period after his appointment or more often as the Supervisor may require, financial statements of the co-operative society in the form required in section 130 or in any form that the liquidator considers proper or that the Supervisor may require.

175. Powers of liquidator

(1) The liquidator may—

- (a) retain attorneys-at-law, accountants, engineers, appraisers and other professional advisors;
- (b) bring, defend or take part in any civil, criminal or administrative action or proceeding in the name and on behalf of the co-operative society;
- (c) carry on the business of the co-operative society as required for an orderly liquidation;
- (d) sell by public auction or private sale any property of the co-operative society; or
- (e) do all acts and execute any documents in the name and on behalf of the co-operative
- (f) borrow money on the security of the property of the co-operative society;
- (g) settle or compromise any claims by or against the co-operative society; and
- (h) do all other things that he considers necessary for the obligation of the co-operative society and distribution of its property.

(2) Where a liquidator has reason to believe that a person has in his possession or under his control or has concealed, withheld or misappropriate any property of the co-operative society, he may apply to the Court for an order requiring that person to appear before the Court at the time and place designated in the order and to be examined.

(3) Where the examination mentioned in subsection (2) discloses that a person has concealed, withheld or misappropriate property of the co-operative society, the court may order that person to restore the property or pay compensation to the liquidator on behalf of the co-operative society.

(4) A liquidator shall purchase, directly or indirectly, any part of the stock-in-trade, debts or assets of the co-operative society.

176. Limitation on liability of liquidator

(1) A liquidator shall not be liable where he relies in good faith on—

- (a) financial statements of the co-operative society represented to him or her—
 - (i) by an officer of the co-operative society; or
 - (ii) by the auditor of the co-operative society in a written report that states that the financial statements reflect fairly the financial condition of the co-operative society; or
- (b) an opinion or statement of an attorney-at-law, accountant, engineer, appraiser or other professional advisor retained by the liquidator.

177. Cost of liquidation

- (1) A liquidator shall pay costs of liquidation out of the property of the co-operative society and shall pay or make adequate provision for all claims against the co-operative society.
- (2) After the date specified by the liquidator for distribution under section 174(c)(iii), the liquidator may distribute all or any part of the assets of the co-operative society among the parties entitled to the assets having regard to the claims of which the liquidator has notice.
- (3) The liquidator shall not be liable for any part of the assets of the co-operative society tributed under subsection (2) to any person notice of whose claims the liquidator did not have at the time of distribution.
- (4) When distributing the assets of a co-operative society under this section, the liquidator shall pay, in priority to the claims of the creditors of the co-operative society, the wages or salaries of all persons, other than directors, employed by the co-operative society at the time of the commencement of the obligation or within one month before, not greater than three months' wages or salary, and those persons are entitled to rank as creditors of the co-operative society for any residue of the claims.

178. Closure of liquidation

- (1) In the liquidation of a co-operative society the funds, including the statutory reserves, shall be applied
 - (a) firstly to the cost of liquidation;
 - (b) secondly to the discharge of the liabilities of the co-operative society;
 - (c) thirdly to the payment of share capital; and
 - (d) fourthly, if the bye-laws of the co-operative society permit, to the payment of a dividend at a rate not exceeding 10% per annum for any period during which no distribution of profits has been made.
- (2) Any surplus remaining after the application of the funds to the purposes specified in subsection (1) may, at the discretion of the Supervisor, be used for any co-operative purpose the Supervisor considers fit.
- (3) Where the liquidation is closed in accordance with subsection (1), the Supervisor shall—
 - (a) issue directions with respect to the custody or disposal of the documents and records of the co-operative society; and
 - (b) discharge the liquidator.
- (4) Where the Supervisor discharges a liquidator under subsection (3), the Supervisor shall issue a certificate of dissolution in the prescribed manner.
- (5) The co-operative society shall cease to exist on the date shown in the certificate of dissolution.

179. Custody of records

A person who has been granted custody of the documents and records of a dissolved co-operative society remains liable to produce those documents and records for six years following the date of its dissolution or until the expiry of any other shorter period that the Supervisor may set.

180. Remuneration of liquidator

- (1) Where there is no agreement or provision fixing the remuneration of a liquidator, the liquidator shall be entitled to a commission based on the net proceeds of the estate of the co-operative society realised after deducting his expenses and disbursements.
- (2) The amount of the commission mentioned in subsection (1) shall be equal to—
 - (a) 5% on the first \$1,000 realised;
 - (b) 2.5% on the next \$4,000 realised; and
 - (c) 1.25% on any sum greater than \$5,000 realised.
- (3) Where a liquidator applies to the Supervisor, the Supervisor, upon the approval of the Commission, may increase the amount of commissions set out in subsection (2).
- (4) A liquidator is entitled to any fee or charge for his services in addition to the commission allowed under this section.

181. Continuation of actions

- (1) Notwithstanding the dissolution of a co-operative society under this Act—
 - (a) a civil, criminal or administrative action or proceeding commenced by or against, the cooperative society before its dissolution may be continued as if the co-operative society had not been dissolved;
 - (b) a civil, criminal or administrative action or proceeding may be brought against the cooperative society within two years after its dissolution as if the co-operative society had not been dissolved; and
 - (c) any property that would have been available to satisfy any judgment or order if the cooperative society had not been dissolved shall remain available for that purpose.

(2) Service of a document on a co-operative society after its dissolution may be effected by serving the document on a person shown on the records of the Supervisor as one of the last directors of the co-operative society.

(3) Notwithstanding the dissolution of a co-operative society, a person to whom any of its property has been distributed is liable to any person claiming under subsection (1) to the extent of the amount received by that person on the distribution with respect to any share of the co-operative society that person held, and an action to enforce such legal years after the date of dissolution of the co-operative society.

182. Unknown claimant or members

(1) On the dissolution of a co-operative society, the liquidator shall convert into money the portion of the property distributable to a creditor or member who cannot be found after a reasonable investigation and shall deposit the money in a co-operative society or with trustees appointed by the Supervisor under this Act.

(2) A payment under subsection (1) shall be in satisfaction of a debt or claim of such creditor or member.

(3) Where a creditor establishes within three years after the dissolution of a co-operative society that he is entitled to any money paid under subsection (1) to a co-operative society or to trustees appointed by the Supervisor, the co-operative society or the trustees shall pay the amount of the claim out of the monies deposited.

(4) Where moneys deposited under this section are not distributed within three years after the dissolution of a co-operative society then, subject to the approval of the Supervisor, the cooperative society or the trustees appointed by the Supervisor shall distribute those monies in accordance with sections 178(2) or the bye-laws.

183. Power of Supervisor to surcharge

(1) Where, in the course of the dissolution of a co-operative society it appears—

(a) that any person who has taken part in the organisation or management of the co-operative society; or

(b) any past or present officer of the co-operative society; has misapplied or retained or become liable or accountable for any money or property of the cooperative society or is guilty of misfeasance or breach of trust in relation to the co-operative society, the Supervisor may, upon the approval of the Commission, on the application of the liquidator or of any creditor or contributor, carry out an examination into the conduct of the person or officer and make an order —

(i) requiring the person to repay or restore the money or any part thereof with interest at such rate as the Supervisor may think just; or

(ii) to contribute such sum to the assets of such co-operative society by way of compensation in regard to the misapplication, retainer, dishonesty or breach of trust as the Supervisor may think just.

(2) This section shall apply notwithstanding that the act is one for which the offender may be criminally responsible.

184. Appeal against surcharge

Any person aggrieved by an order of the Supervisor made under section 183 may appeal to the Tribunal within twenty-one days from the date of such order and the decision of the Tribunal shall be final on any question of fact.

185. Application of Part XI

(1) This part does not apply to a co-operative society that is bankrupt within the meaning of the Bankruptcy Act, Cap.41.

(2) Where a co-operative society is at any time found, in proceedings under the Bankruptcy Act, Cap.41. to be bankrupt within the meaning of that Act, any proceedings taken under this Part to dissolve or to liquidate and dissolve the co-operative society shall be stayed.

PART XII

EXAMINATIONS AND INVESTIGATIONS

186. Examinations

(1) In addition to the powers of routine inspection under sections 5(4) and 22(1) the Supervisor may appoint a person as examiner who shall make an examination of the records and the affairs of the cooperative society.

(2) In its request for an examination under this section, the Supervisor may set such limits and conditions on the scope and conduct of the examination as the Supervisor considers appropriate; and, in carrying out the examination, the powers of the examiner under the provisions of this section shall be limited accordingly.

- (3) An examiner requested by the Supervisor to carry out an examination under this section may, on production of the examiner's authorisation to any person concerned, at all reasonable times inspect and take copies of, or extracts from, any books or documents relating to a co-operative society, and for any of those purposes may enter any premises at which any such books or documents are kept.
- (4) For the purposes of exercising his powers under subsection (3) to take copies or extracts, an examiner may remove from the premises concerned, for such period and on such conditions, if any, as to facilitate access by officers of the co-operative society, as may be reasonably necessary, to any books or documents referred to in that subsection.
- (5) An examiner who is carrying out an examination under this section in relation to a co-operative society may, with the approval of the Supervisor, and subject to any limits imposed by that approval, carry out a similar examination in relation to any other body, whether a co-operative society or not, which is or has been at any relevant time been associated with the first-mentioned cooperative society.
- (6) Where an examination is carried out under this section, the examiner shall make a report of the examination to the Supervisor.
- (7) Where required to do so by notice in writing served by the Supervisor at any time or by an examiner in the course of an examination—
- (a) a co-operative society;
 - (b) any person who is or has been a director, member, agent or liquidator of a co-operative society; and
 - (c) any other person who has in his possession or power any books or documents relating to a co-operative society, shall provide the Supervisor or the examiner such books, documents or information as may be specified in the notice which relate to the co-operative society and are in his possession.
- (8) If required to do so by notice in writing served on it by the Supervisor or by an examiner, a co-operative society shall provide to the Supervisor or the examiner a financial statement or periodic financial statements in such form and containing such information as may be specified in the notice.
- (9) If a notice under subsection (7) or (8)—
- (a) requires that any item or information is to be furnished within a period, or a time or place specified in the notice; or
 - (b) requires that any information is to be verified by a statutory declaration; the co-operative society or person on whom the notice is served shall not be regarded as complying with the notice unless that requirement is also complied with.
- (10) The Supervisor or examiner may take copies of or extracts from any item produced in compliance with a notice under subsection (7) or (8) and if so required by the Supervisor or examiner, the person on whom a notice under subsection (7) was served or, in the case of a statement produced in compliance with a notice under subsection (8), a person who is or has been a director, committee member, member, agent or liquidator of the co-operative society shall provide any explanation which may reasonably be required of an item so produced.
- (11) Where a person on whom a notice is served under subsection (7) does not have in his possession or under his control an item specified in the notice but knows where it is, the person shall not be regarded as complying with the notice unless he states to the best of his knowledge and belief where the item is and, if so required, verifies that information.
- (12) The production by any person of any item forming part of the books and documents of a cooperative society shall not prejudice any lien which that person claims over that item; but nothing in this section shall compel—
- (a) the production by an attorney-at-law of any document containing a privileged communication made by or to him in that capacity; or
 - (b) the provision of information contained in a privileged communication so made.
- (13) A person who contravenes subsection (7) or (8) commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding ten thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.
- (14) If the Supervisor considers it just and so requires by notice in writing, all or any of the expenses incurred by the Supervisor in exercising his powers under subsection (7) shall be met, either wholly or to such extent as the Supervisor may so require—
- (a) out of the funds of the co-operative society; or
 - (b) by the directors or former directors of the co-operative society or any of them, and any sum which a co-operative society or other person is required to pay by a notice under this subsection shall be recoverable summarily by the Supervisor as a civil debt.
- (15) For the purpose of this section "agent" in relation to a co-operative society, includes its bankers, accountants, attorneys-at-law, auditors and its financial and other advisers.
- (16) Subject to subsection 227(3), a director, committee member, employee or agent of a co-operative society shall not—
- (a) obstruct any person who is carrying out an examination under this Act; or
 - (b) obstruct the examination of a co-operative society undertaken under this Act.

(17) A director, committee member, employee or agent of a co-operative society who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding twenty thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both.

187. Investigations

(1) Where—

(a) an application is made to the Supervisor by the lesser of twenty-five members or ten percent of the membership of a co-operative society throughout the period of twelve months ending on the date of the application; and

(b) the Supervisor is of the opinion that it is necessary to do so in the interests of the orderly and proper regulation of the business of a co-operative society; the Supervisor, upon the approval of the Commission, may appoint one or more investigators to investigate the affairs of the co-operative society.

(2) An application under subsection (1)(a) shall be supported by such evidence as the Supervisor may require for the purpose of showing that the applicants—

(a) have good reason for requiring the investigation to be made; and

(b) have not been actuated by malicious motives in their application, and if so required by the Supervisor the applicants shall deposit with it, prior to, and as security for the costs of, the investigation such sum as it may reasonably require.

(3) If an investigator appointed under this section to investigate the affairs of a co-operative society thinks it necessary for the purpose of the investigation to investigate also the affairs or any other body, whether a co-operative society or not, which is or has at any relevant time been associated with the principal co-operative society, the investigator may do so with the approval of the Supervisor.

(4) A notice of an application under subsection (1)(a) as the Supervisor may require shall be given to the co-operative society concerned and, where applicable, to any other body whose affairs are to be investigated by virtue of subsection (3).

(5) Before appointing an investigator under this section, the Supervisor shall, if the Supervisor is of the opinion that it would not be prejudicial to the interests of the members or creditors of the cooperative society, notify the co-operative society in writing of the action which the Supervisor proposes to take and of the grounds on which the Supervisor proposes to take it and, in such case, the Supervisor shall have regard to any explanatory statement in writing which may be given by the co-operative society within fourteen days from the receipt of the notification.

(6) In the case of an investigation, the expenses may be defrayed in the first instance by the Financial Services Regulatory Commission, but it shall be entitled to be repaid these expenses—

(a) where the investigation results from an application under subsection (1)(a), by the applicants, to such extent, if any, as the Supervisor as instructed by the Commission, may direct;

(b) in any case, by the co-operative society or the other body, to such extent, if any, as the Supervisor, as instructed by the Commission, may direct; and in any case, by a person convicted of an offence in proceedings institute the investigation, to such extent, if any, as the court by which the person was convicted may order, and a person liable under any of paragraphs (a) to (c) shall be entitled to contributions from any other person liable under the same paragraph according to the amount of their respective liabilities.

(7) Where an examination undertaken pursuant to this section reveals substantial irregularities in the business of the co-operative society, the Supervisor may choose not to direct any members on whose motion the examination was commenced to defray the expenses.

188. Investigations by Court

(1) A member, the Supervisor or any interested person may apply ex parte, or on any notice that the Court may require, to the Court for an order directing an investigation to be made of the cooperative society and any of its member co-operative societies.

(2) On an application under subsection (1), the Court may order an investigation of a co-operative society or of any of its member co-operatives where it appears to the Court that—

(a) the co-operative society is not fulfilling the purpose stated in its bye-laws;

(b) the co-operative society is not carrying on business in accordance with this Act or the bye-laws;

(c) the co-operative society is not organised or being operated on co-operative principles;

(d) the business of the co-operative society or any of its member co-operative societies is or has been carried out with intent to defraud any person;

(e) the business or affairs of the co-operative society or any of its member co-operative societies are or have been carried on or conducted, or the powers of the directors are or

have been exercised, in a manner that is oppressive or unfairly prejudicial to or that has unfairly disregarded the interests of a member or of a security holder;

(f) the co-operative society or any of its member co-operative societies was formed for a fraudulent or unlawful purpose or is conducting activity which is fraudulent or unlawful or is to be dissolved for a fraudulent or unlawful purpose; or

(g) persons concerned with the formation, business or affairs of the co-operative society or any of its member co-operative societies have acted fraudulently or dishonestly, in connection with the co-operative society.

(3) An applicant for an order under this section is not required to give security for costs. A next part application under this section shall be heard.

(5) A person shall not publish anything relating to ex parte proceedings conducted under this section other than with the authorisation of the Court or the written consent of the co-operative society being investigated.

189. Court order

In connection with an investigation under section 188(1), the Court may make any order it considers appropriate, including an order—

(a) to investigate;

(b) appointing an investigator, fixing the remuneration of an investigator and replacing an investigator.

(c) determining the notice to be given to any interested person or dispensing with notice to that person;

(d) authorising an investigator to enter any premises in which the Court is satisfied there might be relevant information, and to examine anything and make copies of any document or record found on the premises;

(e) requiring any person to produce documents or records to the investigator;

(f) authorising an investigator to conduct a hearing, administer oaths and examine any person on oath, and prescribing rules for the conduct of the hearing;

(g) requiring any person to attend a hearing conducted by an investigator and to give evidence on oath;

(h) giving directives to an investigator or any interested person on any matter arising in the investigation;

(i) requiring an investigator to make an interim or final report to the Court and to the Supervisor;

(j) determine whether a report of an investigator made under paragraph (i) should be published and, where published, ordering the Supervisor to publish the report in whole or in part or to send copies to any person the court designates;

(k) requiring an investigator or an examiner appointed under section 186 to discontinue an investigation; and

(1) requiring the co-operative society or a person who made an application under section 188(1) for an order to pay the costs of the investigation.

190. Powers of investigator

(1) An investigator appointed under section 189(b) shall have the powers set out in the order appointing him or her.

(2) In addition to the powers set out in the order appointing an investigator, the investigator may provide to, or exchange information and otherwise co-operate with, any public official in Antigua and Barbuda or elsewhere who—

(a) is authorised to exercise investigatory powers; and

(b) is investigating, with respect to the co-operative society, an allegation of improper conduct that is the same as or similar to the conduct described in section 188(2).

191. Hearing in camera

(1) An interested person may apply to the Court for an order that a hearing conducted by an investigator appointed under section 189 be heard in camera and for directions on any matter arising in the investigation.

(2) A person whose conduct is being investigated or who is being examined at a hearing conducted by an investigator appointed under section 189(b) has a right to be represented by an attorney -at-law.

192. Incriminating evidence

(1) A person shall not be excused from attending and giving evidence and producing documents and records to an investigator appointed under section 189(b) by reason only that the evidence tends to incriminate the person or subject the person to any proceedings or penalty.

(2) Evidence described in subsection (1) shall not be used or received against any person in any proceeding instituted against the person, other than a prosecution for perjury in giving evidence.

193. Absolute privilege respecting statements

- (1) An oral or written statement or report made during the course of, or as the result of, an investigation or examination authorised by this Part by an investigator or an examiner, or by any other person acting in accordance with powers conferred by this Part in respect of an investigation or examination, shall have absolute privilege.
- (2) Nothing in this Part affects the privilege that exists in respect of an attorney-at-law and his client.

PART XIII DISPUTES

194.

- (1) Where any dispute that relates to the business of a co-operative society arises—
- (a) among members, former members and persons claiming through members or deceased members;
 - (b) between a member, former member or person claiming through a member or a deceased member, and the co-operative society, its Board, or any officer of the cooperative society;
 - (c) between the member and the co-operative society arising out of or under any bye-law relating to the disposal of the produce of agricultural or animal husbandry, or under any contract made under this Act;
 - (d) between the co-operative society and any other co-operative society; or
 - (e) between the co-operative society and its Board, committee member or employee; any party to the dispute may refer it to the Supervisor for decision.
- (2) The Supervisor may, before proceeding to hear or determine a dispute, make or cause to be made a preliminary investigation—
- (a) to ascertain the cause;
 - (b) to define the issues; and
 - (c) to bring about a voluntary settlement between the parties to the dispute.
- (3) The Supervisor may either hear the dispute or delegate authority to hear the dispute to an employee or an office holder, and make and issue a decision, or it may appoint an arbitrator, who shall be an attorney-at-law of at least five years standing, to do so.
- (4) For the purposes of hearing any dispute the Supervisor or the arbitrator appointed by the Supervisor—
- (a) may administer oaths; and
 - (b) may require—
 - (i) the attendance of all parties concerned and witnesses; and
 - (ii) the production of all books, documents and things relating to the dispute.
- (5) The Supervisor or the arbitrator may order the expenses of determining any dispute, including fees to a barrister and solicitor, to be paid by the co-operative society or any of the parties to the dispute.
- (6) A party aggrieved by a decision of the Supervisor or an arbitrator may appeal to the Tribunal within such time and in such manner as may be prescribed.
- (7) Notwithstanding anything in this section, a co-operative society may exercise any rights arising by law under any charges, mortgages, bills of sale or other securities duly executed in accordance with this Act or any other law without recourse to arbitration.
- (8) For the purposes of subsection (1), a claim by a co-operative society for any debt or demand due to it from a member, former member or the personal representative of a deceased member is a dispute that relates to the business of a co-operative society within the meaning of subsection (1).

195. Co-operative Societies Appeals Tribunal

- (1) There shall be a Co-operative Societies Appeals Tribunal which shall consist of three persons, one of whom shall be an attorney-at-law of at least five years standing.
- (2) The Tribunal shall have jurisdiction to hear appeals against a decision of the Supervisor, the Commission or an arbitrator.
- (3) The Schedule shall have effect with respect to the constitution and procedure of the Tribunal.
- (4) The Minister may by regulations made under this Act amend Part 2 of the Schedule, and such regulations shall be subject to affirmative resolution of the Parliament.

196. Case stated on question of law

- (1) Notwithstanding anything contained in sections 194 and 195, the Supervisor, upon the approval of the Commission or an arbitrator may, in the course of or on making a decision in a dispute, refer a question of law arising therefrom to the Court, by way of case stated for the opinion of that Court.
- (2) A judge may consider and determine any question of law so referred and the opinion given on such question shall be final and binding.

197. Enforcement of award and recovery of loans

- (1) An award by the Supervisor or an arbitrator may, by leave of the Court, be enforced in like manner as a judgment or order the same effect, and where leave is so given, judgment may be entered in terms of the award.
- (2) Where a dispute relates to the recovery of a loan made by a co-operative society to a member of that co-operative society, such a dispute may, notwithstanding section 194, be brought before the magistrate for the district in which the co-operative society conducts business.
- (3) A magistrate shall have jurisdiction under subsection (2), even though the amount due exceeds the limits of jurisdiction of a magistrate specified in the Magistrates Code of Procedure Act, Cap. 255.

PART XIV

SPECIALISED CO-OPERATIVE SOCIETIES CREDIT UNIONS

198. Functions of Supervisor, immunity, sanctions and corrective action

- (1) The Supervisor shall administer the system of regulation and supervision of credit unions provided for under this Act with a view to—
 - (a) the protection by each credit union of the funds of its members; and
 - (b) the maintenance of financial stability and well-being in credit unions generally.
- (2) The Supervisor shall have power to do anything which, in his opinion, is necessary to facilitate the exercise of his functions or is incidental to or consequential on their exercise, and, in the exercise of any such power the Supervisor may consult such other bodies as appear to him to be expert or knowledgeable in matters relating to credit unions but in any case he shall obtain the approval of the Commission before the exercise of such power.
- (3) The registration of a credit union or the imposition of any prudential, supervisory or reporting requirements or conditions by the Supervisor shall not constitute a warranty as to the solvency of the credit union to which registration is given and the Supervisor shall not be liable in respect of any losses incurred through the insolvency or default of a co-operative society which is registered as a credit union.
- (4) Where after an examination under section 186 or after an investigation under section 187, or on the receipt of any other information the Supervisor is of the opinion, that it is necessary to act in the interest of the orderly and proper regulation of the business of a credit union, in addition to the powers conferred by section 5, the Supervisor upon the approval of the Commission may—
 - (a) place the credit union under administrative supervision; and
 - (b) take any other necessary action to correct the non-compliance or unsafe or unsound practice, including
 - (i) prohibiting the disposal, conveying or encumbering of any of the credit union's assets;
 - (ii) prohibiting the incurring by the credit union of any debt, obligation or liability;
 - (iii) prohibiting the investing of any of the credit union's funds;
 - (iv) prohibiting the withdrawal of any of the credit union's accounts at other financial institutions;
 - (v) suspending the credit union's acquisition of fixed assets;
 - (vi) suspending or restricting the credit union's lending operations; and
 - (vii) increasing the credit union's allocation to reserves.
- (5) The credit union shall comply with the requirements of the Supervisor under subsection (4) and where the credit union fails to do so, the Supervisor may, upon the approval of the Commission, appoint an administrator for the credit union, for a period not exceeding twelve months.
- (6) If at any time the Supervisor determines that the credit union is not in condition to continue business under the administrator, in the interest of the members, depositors or creditors and in accordance with section 156, the Supervisor may, upon the approval of the Commission, appoint a receiver or a receiver-manager for the credit union.
- (7) All costs incidental to the period of administrative supervision will constitute an allowable charge against the assets of the credit union and shall be paid as the Supervisor, upon the approval of the Commission, may determine.

199. Restrictions

- (1) A credit union shall not underwrite insurance or the issue of securities by another person.
- (2) Nothing in subsection (1) shall prevent a credit union from requiring insurance for the security of the credit union.
- (3) A credit union shall not demand from a potential borrower that—
 - (a) any additional services, including appraisal valuations or security, be obtained from a specific provider; or

(b) the borrower should utilise any other services of the credit union, as a condition of, or in consideration of, obtaining a loan.

(4) Subject to subsection (5), a credit union may only hold real property the aggregate market value of which does not exceed ten per cent of its total assets.

(5) Notwithstanding subsection (4), the Supervisor may, if the Supervisor is satisfied that the circumstances require it and upon the approval of the Commission, grant approval to a credit union to hold real property in excess of the percentage specified in subsection (4).

Subsection (5) shall not apply where the credit union exercises its property which is the security for any debt, and in such a case, the property shall not be retained for a period in excess of five years without the permission of the Supervisor unless in the meantime the aggregate value of the real property held by the credit union is reduced to below the percentage specified in subsection (4).

(7) Nothing in subsection (4) shall be interpreted as requiring a credit union—

(a) to dispose of any real property that was acquired before the coming into force of this Act; or

(b) to terminate any agreement to acquire or hold any real property where the agreement was entered into before the coming into force of this Act.

(8) Without prejudice to the generality of subsection (1), a credit union may, with the permission of the Supervisor, do all other acts and things as are incidental or conducive to or consequential upon the attainment of its objects.

200. Liquid assets

(1) A credit union shall at all times keep a such a proportion of its total assets in liquid form as prescribed in the Regulations as will enable the credit union to meet its liabilities as they arise.

(2) For the purpose of complying with subsection (1) a credit union shall ensure that no less than fifteen per cent or such greater percentage as may be specified by the Supervisor from time to time, of its members unencumbered deposits and other short term liabilities, are maintained in a liquidity reserve; but nothing in this Act shall be taken to prevent a credit union keeping liquid assets in addition to those required for complying with subsection (1).

(3) Subject to section 125(1) (b), a credit union shall not capitalise its statutory reserves by way of bonus shares or distribute it by way of dividends.

(4) Despite the provisions of section 125(1)(b), whenever the Board of a credit union so recommend to the members and a majority of the members present and voting at a general meeting by resolution so approve—

(a) the allocation to its statutory reserves may be increased; or

(b) if its statutory reserves at the end of the financial year in question equals or exceeds ten per cent of assets, the allocation may be reduced.

201. Loan loss provisions

(1) A credit union shall at least annually evaluate the quality and collectability of the loan portfolio and establish adequate loan loss allowance.

(2) The Supervisor may in accordance with the standards prescribed by to implement the requirement for an adequate loan loss allowance.

202. Loan approval

(1) A loan made by a credit union shall be approved in accordance with the policies established by the directors before any funds are advanced.

(2) A loan to a director, officer, committee member or an employee of a credit union or an associate of any of them, shall be approved in the manner prescribed.

(3) A person who knowingly approves or grants a loan by a credit union in contravention of this Act is liable for any losses resulting to the credit union in connection with that loan.

203. Security for loans

(1) Subject to any restrictions that may be prescribed in the Regulations, a credit union may take any security for loans and other risk assets that it considers advisable and in keeping with sound business and risk management practices.

(2) For the purposes of this section, “risk assets” means loans, investments and other property of the co-operative society with possible loss results, which form the basis of determining the amount of the co-operative society’s income to be set aside as provision for loss.

204. Loan limits

The limits on the amount of loans made by a credit union shall be in accordance with section 121.

205. Reporting loans

- (1) Where a credit union is reporting loans, it shall report the loans at their fair value deducting provision for loan impairment on the balance sheet in its annual financial statements under section 201.
- (2) Any advance given by way of overdraft or line of credit is deemed to be a loan for the purposes of the balance sheet and shall be reported as a loan.

206. Interest on loans

- (1) The maximum intervals at which interest on loans made by a credit union are to be paid may be prescribed in the Regulations.
- (2) The rate of interest to be charged on loans shall be fixed from time to time by the Board.

207. Acceptance of deposits

- (1) Subject to section 123, a credit union may accept deposits—
- (a) from members;
 - (b) from other co-operative societies;
 - (c) from government and non-government agencies; and
 - (d) bodies corporate.
- (2) Deposits may be accepted in the manner and form and on any condition that may be prescribed in the Regulations.

208. Credit unions and trusts

- (1) A credit union is not bound to see to the execution of any trust, whether express, implied or constructive, to which any deposit or share is subject.
- (2) Where any deposit or share is subject to a trust of which the credit union has notice, the receipt or order—
- (a) of the trustee in whose name the deposit or share stands; or
 - (b) if the deposit or share stands in the names of two or more trustees, all those trustees or any of them who, under the document creating the trust, may be entitled to receive the deposit or share, is, notwithstanding any trust to which the depositor share is subject, a sufficient discharge to the credit union for the payment of any money payable in respect of the deposit or share, and the credit union is not bound to see to the application of any money paid on the receipt or order.
- (3) Notwithstanding any neglect or omission on the part of a credit union to enter a proper description in its books, an executor, an administrator, a guardian, a committee or a trustee who is entered on the books of the credit union as a member, or who is described as representing a named estate, trust or trust beneficiary in such capacity shall not be personally liable to the credit union with respect to the share that he represents.
- (4) The estate or trust beneficiary represented by a person described in subsection (3) continues to be liable to the credit union in the same manner and to the same extent as if the testator, minor, ward, person of unsound mind, beneficial trust or their trust beneficiary were entered on the records of the credit union as the holder of the shares.

209. Restrictions on directorship

- (1) Subject to subsection (2), an employee of a consumers' society, or housing society or service society shall not be a director of the society.
- (2) A society shall provide in its bye-laws that none of its elected directors shall be employees.

210. Relationship with members

The relationship between a housing co-operative society and its members is not a relationship between a landlord and his tenants.

211. Bye-laws

The bye-laws of a housing co-operative society shall include, in addition to the matters required by section 13—

- (a) the manner in which each member may be required to provide capital for the purposes of the co-operative society;
- (b) the manner in which a member may be required to pay for housing charges or other reserves;
- (c) the basis for fixing the amount of housing charges;
- (d) subject to section 30, the manner of withdrawal by a member and the repayment of a member's interests in the co-operative society; and
- (e) the rules governing any leases of housing units by members to non-members.

212. Amendment of bye-laws

Where the bye-laws of a co-operative society provide that it is a housing co-operative society or that this Part applies to the co-operative society, the co-operative society may not repeal or amend that provision of the bye-laws without the consent of the Supervisor.

213. No dividend on share capital

Where a housing co-operative society has a share capital the co-operative society shall not pay any dividend on the share capital to its members.

214. Right to possession terminated.

(1) Where a person's membership in a housing co-operative society is terminated, any right of that person to possess or to occupy residential premises acquired by virtue of membership in the cooperative society is terminated.

(2) Where a person's membership in a housing co-operative society is terminated and the member does not give up possession of the housing unit he occupies, the housing co-operative society may apply to the Court to recover possession or to recover any arrears of housing charges.

215. Abandoned goods

(1) Where a member of a housing co-operative society—

(a) has his membership terminated or has vacated or abandoned the housing unit formerly occupied by him or her; and

(b) has left property in the housing unit, the co-operative society may apply to the Magistrates Court for the District where the housing unit is situate for an order authorising it to remove the property from the housing unit and sell or otherwise dispose of it.

(2) The Magistrate may make an order under subsection (1) where the Magistrate is satisfied that the housing co-operative society has made a reasonable effort to locate the former member.

(3) Where a housing co-operative society sells or otherwise disposes of property under an order made under subsection (2), it shall pay into the Magistrate's Court, to the credit of the former member, any remaining proceeds of the disposition after deducting—

(a) any amount with respect to costs incurred by it relating to the disposition that it would be authorised to retain if the property were goods sold under distress for housing charges; and

(b) any arrears of housing charges and damages that the Magistrate allows.

(4) Where a former member does not claim the remaining proceeds described in subsection (3) within three months after the date the money was paid into the Magistrates Court, the money shall be paid into the Consolidated Fund.

(5) Where a housing co-operative society removes, sells or otherwise disposes of property under an order made under subsection (2), the housing co-operative society is not liable in any action taken by the former member with respect to the removal, sale or disposition.

216. Membership

(1) In an industrial co-operative society, seventy-five per cent of all employees shall be members of the co-operative society.

(2) An industrial co-operative society shall not subcontract out more than fifty per cent of its work without the consent of the Supervisor.

217. Bye-laws

In addition to the matters required to be set out in the bye-laws under section 13, the bye-laws of an industrial co-operative society shall include—

(a) conditions of admission, expulsion or suspension of its members;

(b) a procedure for laying off members when there is a lack of work and a procedure of recall to work;

(c) remuneration of workers involved in the day to day work of the co-operative society; and

(d) allocation of bonus among members.

218. Restriction on registration

An industrial co-operative society shall not be registered where the acquisition of goods for sale to the public is one of its principal objects stated in its bye-laws.

219. Bonus based on labour

When allocating among creditors or paying a bonus to the members, the directors of an industrial cooperative society may take into account the labour contribution of each member.

220. Employees may not be directors

Directors of an industrial society shall not be employees of the society.

PART XV APEX BODY

221. Establishment and constitution of apex body

Co-operative societies may establish an apex body which shall be composed of such member representatives of the majority of co-operative societies which may exist in Antigua and Barbuda.

The apex body shall be a co-operative society under this Act and shall coordinate, assist and promote activities for the development, growth and expansion of all co-operative societies and shall perform representational and other functions as may be determined by its constituent members, including—

- (a) assisting with the formation and readiness for registration of viable co-operative societies;
- (b) the initiation and encouragement of capacity development activities beneficial to cooperative societies;
- (c) liaison and coordination with all co-operative societies;
- (d) stimulation of community awareness and public confidence; and
- (e) representation of the interests of the co-operative sector.

223. Officers

(1) The officers of the apex body shall be elected at the first meeting of that body and shall hold office for a period of one year and thereafter the election of such officers shall be in accordance with the bye-laws of the apex body.

(2) The apex body shall regulate its own procedure and may establish its own central credit union or central co-operative society in conjunction with other apex bodies and co-operative societies to provide specialised services and facilities to members.

224. Consultation by Supervisor

The Supervisor shall, from time to time, consult the apex body or a central credit union or central cooperative society with respect to matters relating to the development of co-operative societies.

PART XVI OFFENCES

225. Corrupt practices and bribery

(1) A member, agent or employee of a co-operative society shall not accept, agree to accept, obtains or attempt to obtain whether for himself or another, any gift or consideration as an inducement reward for—

- (a) doing or forbearing to do any act relating to the business of the co-operative society; or
- (b) for showing favour or disfavour to any person in relation to the business of the co-operative society.

(2) A person shall not give, agree to give, or offer such gift or consideration to any member, agent or employee of a co-operative society as inducement or reward for any purpose mentioned in subsection (1).

(3) A person who contravenes subsection (1) or (2) commits an offence and is liable—

- (a) on summary conviction to a fine not exceeding ten thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both; or
- (b) on conviction on indictment to a fine not exceeding fifty thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding three years, or to both.

(4) In this section “consideration” includes valuable consideration of any kind.

226. Falsely obtaining property of co-operative society

(1) A person shall not—

- (a) obtain possession of any property or the grant of a loan from a co-operative society by false representation or other corrupt means;
- (b) wrongfully withhold or misapply any property belonging to or loan from a co-operate society; or
- (c) wilfully apply any part of property belonging to or loan from a co-operate society for purposes other than those directed or expressed in the bye-laws of the co-operative society or authorised in this Act.

(2) A person who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable—

- (a) on summary conviction to a fine not exceeding five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both; or
- (b) on conviction on indictment to a fine not exceeding twenty thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both.

(3) In any proceedings under this section the person accused may, in addition to any penalty imposed, be ordered—

(a) to deliver up any property or repay any sum of money to which the proceedings relate; and

(b) pay the cost of the proceedings.

227.

(1) A person shall not—

(a) fail without reasonable cause or wilfully neglect or refuse to comply with a requirement of this Act or to provide any information in circumstances for which a penalty is not provided elsewhere in this Act; or

(b) purporting to comply with a requirement for information under this Act, provide information which the person knows to be false,

(2) A person shall not wilfully or without reasonable cause disobey any summons, order or direction lawfully issued under this Act.

(3) A person shall not knowingly alter, destroy, mutilate, conceal, cover or falsify or makes a false entry in any record or document of or belonging to a co-operative society with intent to impede, disrupt or influence an investigation or the proper administration of any matter.

(4) An officer or member of a co-operative society shall not wilfully contravene the bye-laws of the co-operative society in relation to his duties or functions as such officer or member.

(5) A person who contravenes subsection (1), (2) (3) or (4) commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding twenty thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both.

228. Dealing in property subject to charge

(1) A person shall not—

(a) fraudulently remove any property comprised in a charge created in favour of a co-operative society from the place where such property was situated at the time of the execution of the charge; or

(b) knowingly dispose of, or deal with or attempt to dispose of or deal with such property without first obtaining in writing leave of the co-operative society.

(2) A person who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both.

(3) The Court may in addition to any penalty imposed on a person under subsection (1), require that person to repay such amount of the loan with interest as has not been repaid at the date of the conviction and the payment of that amount shall discharge the liability of the borrower to repay the loan.

229. Offences with respect to reports

(1) A person shall not make or assist in making a report, return, notice or other document, required by this Act to be sent to the Supervisor to any other person, that—

(a) contains an untrue statement of a material fact; or

(b) omits to state a material fact required in the report or necessary to make a statement contained in the report not misleading in the light of the circumstances in which it was made.

(2) A person who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable on summary conviction in the case of an individual, to a fine not exceeding five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both; or in the case of a person other than an individual, to a fine not exceeding ten thousand dollars.

(3) A person does not commit an offence under subsection (2) where the untrue statement or omission was unknown to him or her, and in the exercise of reasonable diligence, could not have been known to him or her.

(4) A director, officer, employee or agent of a co-operative society shall not—

(a) obstruct any person who is carrying out an examination under section 186; or

(b) obstruct the examination of a co-operative society undertaken under section 186.

(5) A person who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding five thousand dollars or imprisonment for a term not exceeding six months or to both, or on conviction on indictment to a fine not exceeding twenty thousand dollars or imprisonment for a term not exceeding two years or to both.

230. Contravention of the Act

(1) A person shall not—

(a) fail to give any notice or fail to send any return or document that is required for the purpose of this Act; or

(b) fail to hold an annual or special general meeting within the stipulated or extended time in conformity with sections 42, 43 and 44 of the Act.

(2) A person who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable on summary conviction—

(a) in the case of a first offence to a fine not exceeding five thousand dollars; and in the case of a subsequent offence to a fine not imprisonment for a term not exceeding six months.

(3) Where a body corporate commits an offence under this Act and the offence is proved to have been committed with the consent or connivance of, or to be attributable to any neglect on the part of—

(a) any director, manager, secretary or other similar officer of the body corporate; or

(b) any person who was purporting to act in such capacity, he or she, as well as the body corporate, shall commit the offence and be liable to be proceeded against and punished accordingly.

(4) For the purposes of subsection (2), “director”, in relation to a body corporate whose affairs are managed by its members, means a member of the body corporate.

(5) The Regulations may create an offence punishable on summary conviction by a fine not exceeding twenty thousand dollars or imprisonment for a term not exceeding two years or by both.

231. Use of words “credit union” and “co-operative”

(1) A person shall not, in doing business in Antigua and Barbuda—

(a) use the words “credit union” or “co-operative” or any abbreviation or derivation thereof as part of the name of the business or with respect to goods, wares, merchandise or services or the person’s method of conducting business; or

(b) hold himself or herself or his business to be a registered co-operative society; unless the person or his business is registered under this Act.

(2) A person who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both.

232. Court order to comply

Where a person is convicted of an offence under this Act, the court may, in addition to any punishment imposed, order the person to comply with the provision of this Act for the contravention of which he has been convicted.

233. Limitation

The effluxion of time is no bar to prosecution for an offence under this Act.

234. Preservation of civil remedy

A civil remedy for an act or omission under this Act is not suspended or affected by reason that the act or omission is an offence under this Act.

PART XVII

MISCELLANEOUS

235. Interpretation

In this Part “duplicate originals” means the two copies of the bye-laws or statements required in section 236;

“statement” means a special resolution stating an intent to dissolve mentioned in section 164.

236. Execution and filing

(1) Where this Act requires that bye-laws or a statement relating to a co-operative society shall be sent to the Supervisor, unless otherwise specifically provided, the co-operative society shall send three copies of the bye-laws or statement signed by a director or an officer of the co-operative society.

(2) Subject to the other provisions of this Act, where the Supervisor receives duplicate originals of any bye-laws or statement under subsection (1) and they are accompanied by any other required documents and the prescribed fees, the Supervisor shall—

(a) endorse on each of the duplicate originals the word “Registered” and the date of the registration;

(b) issue in duplicate the appropriate certificate and attach to each certificate one of the duplicate originals of the bye-laws or statements;

(c) file a copy of the certificate and attached bye-laws or statement;

(d) send to the co-operative society the original certificate and attached bye-laws or statement; and

(e) publish in the Gazette notice of the issue of the certificate.

- (3) The Supervisor may date a certificate mentioned in subsection (2) as of the day it receives the bye-laws or statement issued under which the certificate is issued or as of any later day specified by the person who signed the bye-laws or statement.
- (4) A signature required on a certificate mentioned in subsection (2) may be printed or otherwise mechanically produced.

237. Waiver of notice

Where a notice or document is required by this Act to be sent, the sending of the notice or document may be waived or the time for sending the notice or document may be waived or abridged at any time with the consent in writing of the person entitled to receive the notice or document.

238. Certificate of co-operative society

- (1) A director or officer of a co-operative society may—
- (a) sign a certificate stating any fact set out in; or
 - (b) certify a copy of the whole or any part of; the bye-laws, or any other contract to which the co-operative society is party or the minutes of a meeting of the directors, a committee of directors or the members.
- (2) A certificate or certified copy described in subsection (1) is admissible in evidence as prima facie proof of the facts contained in the certificate or certified copy without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the certificate or the certification.

239. Documents

- (1) Where a notice or document is required to be sent to the Supervisor under this Act, the Supervisor may accept a photo-static or photographic copy of the notice or document.
- (2) A person is not affected by, or presumed to have notice or knowledge of, the contents of a document concerning a co-operative society by reason only that the document has been filed with the Supervisor or is available for inspection at any office of the co-operative society.

240. Alteration

Where the Supervisor is authorised to do so by the person who sent a notice or document or his representative, the Supervisor may alter the notice or document, but it may not alter an affidavit or statutory declaration.

241. Rectification and correction

- (1) Where there is an error in the bye-laws, a notice, a certificate or any other document, the directors or members shall, on the request of the Supervisor—
- (a) pass any necessary resolutions;
 - (b) send to the Supervisor the relevant documents required to comply with this Act; and
 - (c) take any other steps that the Supervisor may reasonably require, in order that the Supervisor may correct the bye-laws, notice, certificate or document.
- (2) Before making a correction under subsection (1), the Supervisor shall be satisfied that the correction would not prejudice any of the members or creditors of the co-operative society.
- (3) The Supervisor may, at the request of a co-operative society or of any other interested person, accept a corrected version of any of the documents referred to in subsection (1) if—
- (a) the correction is approved by the directors of the co-operative society; and
 - (b) the Supervisor is satisfied that the correction would not prejudice any of the members or creditors of the co-operative society.
- (4) If in the view of—
- (a) the Supervisor;
 - (b) the co-operative society; or
 - (c) any interested person, a correction to any of the documents referred to in subsection (1) above would prejudice a member or a creditor of the co-operative society, the Supervisor, the co-operative society or the person may apply to the Court for an order that the document be corrected and for an order determining the rights of the members or creditors.
- (5) An applicant under subsection (4) shall give the Supervisor notice of the application, and the Supervisor shall be entitled to appear and to be heard and represented by a member of the staff of the Supervisor or by an attorney-at-law.
- (6) A corrected document shall bear the date of document it replaces.
- (7) If a corrected certificate materially amends the terms of the original certificate, the Supervisor shall without delay give notice of the correction in the Gazette and in a newspaper published and circulated in Antigua and Barbuda.
- (8) The Supervisor may on its own initiative correct any—
- (a) linguistic error;

- (b) error of transcription;
- (c) clerical error;
- (d) mistake where the error is made by the Supervisor or where the error is not substantive in nature.

242. Exemption from stamp duty and other taxes

- (1) A co-operative society registered under this Act is exempt from any stamp duty, taxes and fees, with which, under any law for the time being in force, instruments executed by or on behalf of such co-operative society or by an officer or member and relating to the business of such co-operativesociety, or any class of such instruments, are respectively chargeable.
- (2) Notwithstanding the provisions of any other law in force in Antigua and Barbuda, a co-operative society shall be exempt from the payment of income tax, corporation tax and any other tax on the incomes of such co-operative society.
- (3) Notwithstanding the provisions of any other law in force in Antigua and Barbuda providing for the payment of customs duties, consumption taxes, excise taxes, environmental levy or customs service charge, the Minister in Cabinet may by Order published in the Gazette, exempt a society registered pursuant to this Act from liability to customs duties, consumption taxes, excise taxes, environmental levy or customs service charge on goods imported by the society.

243. Limitation jurisdiction

Except as is expressly provided in this Act, a civil court shall not have any jurisdiction in respect of any matter concerned with the dissolution of a co-operative society under this Act.

244. Proof of entry in books and other documents

- (1) A copy of any entry in a book or other document that is required to be kept by this Act shall, if certified by the Supervisor be received in any legal proceedings, civil or criminal, as prima facie evidence of the existence of such entry and shall be admitted as evidence of the matters, transactions and accounts therein recorded in every case where, and to the same extent as, the original entry itself is admissible.
- (2) An officer of a co-operative society shall not, in any legal proceedings to which the co-operative society is not a party, be compelled to produce any of the co-operative society's books, the content of which can be proved under subsection (1), or to appeal as a witness to prove any matters, transactions or accounts therein recorded, unless the Court for special reasons so directs.

245. Immunity of Supervisor and staff

The Supervisor or any other person exercising a function under this Act, shall not be liable in damages for anything done or omitted in the discharge or purported discharge of their respective functions under this Act unless it is shown that the act or omission was in bad faith.

246. Abandoned property

- (1)Subject to subsection (2), where there has been no activity relating to the property specified in paragraphs (a) and (b) for a period of 15 years except for the posting of interest and dividends the property specified in paragraphs (a) and (b) which are held or owing by a co-operative society shall be presumed to be abandoned—
 - (a) any general deposit, demand, savings or matured time deposit made in Antigua and Barbuda with a credit union, together with any interest or dividend, but excluding any lawful charges thereon;
- The Co-operative Societies Act, 2010. 142 No. 9 of 2010

4.2.BAHAMAS

4.2.BAHAMAS
CO-OPERATIVE SOCIETIES
LRO 1/2008 STATUTE LAW OF THE BAHAMAS

CHAPTER 314
CO-OPERATIVE SOCIETIES
LIST OF AUTHORISED PAGES

1 - 85 LRO 1/2008

ARRANGEMENT OF SECTIONS

SECTION

- 1. Short title.**
- 2. Interpretation.**
- 3. Reference to Registrar General.**
- 4. Application of Act and use of the word “Co-operatives”.**
- 5. Co-operative principles.**

PART I - REGISTRATION OF SOCIETIES

- 6. Director of Societies and Staff.**
- 7. Functions of Director of Societies.**
- 8. Application for registration.**
- 9. Conditions for registration.**
- 10. Registration of a Society.**
- 11. Effect of registration.**
- 12. A society to be a body corporate.**
- 13. Society to conform to co-operative principles.**
- 14. Display of certificate.**
- 15. Suspension and cancellation of registration.**
- 16. Board of Directors.**
- 17. Committees.**
- 18. General meetings.**
- 19. Organization of meeting.**
- 20. First annual meeting.**
- 21. Special meetings.**
- 22. Notice of meetings.**
- 23. Record date.**
- 24. Quorum.**
- 25. Delegates.**

PART II - RIGHTS AND LIABILITIES OF MEMBERS

- 26. Qualifications for membership.**
- 27. Application for membership.**
- 28. Membership fees and membership register.**
- 29. Withdrawal of membership.**
- 30. Voting rights.**
- 31. Liability of current and past members.**

PART III - BUSINESS OF SOCIETIES

- 32. Shares.**
- 33. Limitations on shareholding.**
- 34. Dormant accounts.**
- 35. Transfer of shares generally.**
- 36. Transfer of shares of a member who is of unsound mind.**
- 37. Lien on shares.**
- 38. Restriction on transfer of shares or interest in capital.**
- 39. Power of nomination.**
- 40. Transfer of share or interest on death of member.**
- 41. Disposal of produce through society.**
- 42. Creation of charge in favour of society.**
- 43. Execution and registration of charge.**
- 44. Claims etc. not affected by section 42.**
- 45. Prior claim in favour of society.**
- 46. Enforcement of a charge.**
- 47. Assignment of a charge.**
- 48. Bond as additional security for loan.**

PART IV - DIRECTORS AND OFFICERS

- 49. First directors.**
- 50. Directors' powers.**
- 51. Committees.**
- 52. Election of directors.**
- 53. Qualifications of directors.**
- 54. Borrowing powers.**
- 55. Meeting by telephone etc.**
- 56. Minutes of directors.**
- 57. Ceasing to hold office.**
- 58. Removal of directors.**

- 59. Attendance at meeting.
- 60. Number of directors.
- 61. Notice of change in directors.
- 62. Meeting of directors.
- 63. Validity of acts of directors and officers.
- 64. Remuneration of directors.
- 65. Remuneration of employees.
- 66. Duty of care of directors and officers.
- 67. Misuse of confidential information.
- 68. Liability of directors.
- 69. Indemnification of directors.
- 70. Duty of a director not to be limited.
- 71. Material contracts.
- 72. Officers.
- 73. Bond.
- 74. Declaration by directors and officers.
- 75. Obligation to file declaration.

PART V - PROPERTY AND FUNDS OF SOCIETIES

- 76. Deposit of funds.
- 77. Loans by society.
- 78. Receipt of loans and deposits.
- 79. Receipt of deposits from minors.
- 80. Prohibition on borrowing.
- 81. Statutory reserve, liquidity, development and stabilization funds, and disposal thereof.
- 82. Pension fund.
- 83. Contributions to a charitable co-operative purpose.
- 84. Dividend, bonus, etc.

PART VI - AUDIT, INQUIRY AND INSPECTION

- 85. Audit.
- 86. Annual and special returns.
- 87. Cost of inquiry.
- 88. Inspection by director.
- 89. Investigations by director.
- 90. Request for special investigations.
- 91. Dissolution of board of a society.

PART VII - DISPUTES

- 92. Settlement of disputes.
- 93. Registered Societies Appeal Tribunal.
- 94. Case stated on question of law.

PART VIII - RECONSTRUCTION OF SOCIETIES

- 95. Methods of reconstruction.
- 96. Conversion.
- 97. Conversion effective upon issue of certificate of registration by director.
- 98. Amalgamation of societies.
- 99. Transfer of assets of societies.
- 100. Claims of objecting creditors.
- 101. Division of society into two or more societies.
- 102. Effect of registration of new societies.

PART IX - WINDING UP AND ANCILLARY MATTERS

- 103. Winding up.
- 104. Winding up by virtue of reduced membership.
- 105. Voluntary winding up.
- 106. Power of director pursuant to a winding up order.
- 107. Powers of liquidator.
- 108. Power of director to control liquidator.
- 109. Cancellation of registration consequent upon winding up.
- 110. Disposal of surplus assets.
- 111. Power of director to surcharge officers etc. of a society.
- 112. Attachment of property.
- 113. Enforcement.
- 114. Limitation of jurisdiction of civil court.

PART X - APEX BODY

- 115. Establishment and constitution of Apex Body.**
- 116. Functions of Apex Body.**
- 117. Management.**
- 118. Consultation of Director of Societies.**

PART XI - CREDIT UNIONS

- 119. Interpretation.**
- 120. Application of this part.**
- 121. Restriction.**
- 122. Reserves and allowances.**
- 123. Loan approval.**
- 124. Security for loans.**
- 125. Loan limits.**
- 126. Reporting loans.**
- 127. Interest on loans.**
- 128. Deposits.**
- 129. Credit Union not bound to see to trust.**
- 130. Credit committee.**
- 131. Duties of credit committee.**
- 132. Removal by membership of credit committee.**
- 133. Officer to approve loan.**
- 134. Credit committee reports.**
- 135. Removal by members.**
- 136. Supervisory committee.**
- 137. Duties.**
- 138. Removal by membership of supervisory committee.**
- 139. Clerks.**
- 140. Misappropriation, etc.**
- 141. Meetings.**
- 142. Removal by members.**

PART XII - CONSUMERS' SOCIETIES

- 143. Interpretation.**
- 144. Application of this Part.**
- 145. Restrictions of directorship.**
- 146. Reserve.**

PART XIII - HOUSING SOCIETIES

- 147. Interpretation.**
- 148. Application of this Part.**
- 149. Relationship with members.**
- 150. Bye-laws not to be amended without consent of director.**
- 151. Bye-laws.**
- 152. No interest on share capital.**
- 153. Reserves.**
- 154. Non-application of Landlord and Tenant Act.**
- 155. Right to possession terminated.**
- 156. Abandoned goods.**

PART XIV - INDUSTRIAL SOCIETIES

- 157. Interpretation.**
- 158. Application.**
- 159. Member employee.**
- 160. Workers' bye-laws.**
- 161. Restriction on registration.**
- 162. Bonus based.**
- 163. Employees may be directors.**

PART XV - FORMER-ACT SOCIETIES

- 164. Former-Act society.**
- 165. Effect of corporate instrument.**
- 166. Continuation as society.**
- 167. Amending instrument.**
- 168. Bye-laws.**
- 169. Certificate of continuance.**
- 170. Preservation of society.**
- 171. Non-continuance.**

172. Effect of earlier references.

PART XVI - OFFENCES

173. Corrupt practices and bribery.

174. Falsely obtaining property of society.

175. Failure to comply with the Act, etc.

176. Dealing in property subject to charge.

177. Offences with respect to reports.

178. Penalty for offences not otherwise provided for.

PART XVII - MISCELLANEOUS

179. Appeals.

180. Evidence of documents and of entries in books.

181. Exemption from stamp duties and other fees.

182. Non-application of certain Acts.

183. Regulations.

184. Repeals

185. Exemption from stamp duty.

186. Power to amend bye-laws.

PART XVIII - TRANSITIONAL

187. Societies deemed to be registered.

An Act respecting the registration, supervision and management of Co-operative Societies, the members of which have a common bond of philosophy and social and economic objectives [*Assent 29th September, 2005*]
[*Commencement 4th October, 2005*]

1. This Act may be cited as the Co-operative Societies Act.

2. In this Act —

“Apex Body” means a National League or other like body for co-operatives established for the purposes of section 115; “board” means the board of directors or other directing body to whom the management of the affairs of a society is entrusted;

“bonus” means the equitable return to a member of a co-operative society from net profits after the payment of reserves and dividends in proportion to the production of goods and services by the cooperative during the preceding financial year;

“bye-laws” means the registered bye-laws made by a society pursuant to this Act and includes a registered amendment to the bye-laws;

“co-operative society” means a body corporate registered under this Act which has as its object the operation of any enterprise or service on a cooperative basis or on a basis which, in the opinion of the Director of Societies is substantially similar to a co-operative basis;

“deposits” means savings placed with a society that may be withdrawn on demand;

“director” means a member of the board of a cooperative society;

Short title.

Interpretation.

“Director of Societies” means that person appointed under section 6;

“dividend” means a payment made to members from the net surplus subsequent to retained earnings becoming positive and statutory reserves having been deducted;

“equity shares” means those shares held by a member that are in excess of the qualifying shares, the value of which are prescribed by bye-laws;

“management” means persons who are employed by the board to manage, or such committee so designated by the board;

“Minister” means the Minister responsible for cooperatives;

“patronage refund” means the returns to members from net profits, allocated in proportion to the volume of business each individual has done with the co-operative during the financial year;

“provisional directors” means members of the Steering Committees who will hold office after registration, and until the board of directors is elected at the first annual general meeting;

“qualifying shares” means the minimum number of shares required for membership in a registered society, such minimum to be prescribed by the bye-laws; and

“society” or “registered society” means a co-operative registered under this Act.

3. In this Act, a reference to the Registrar General shall also be construed as a reference to any other public officer who has the responsibility for the receipt and registration of documents relating to registered societies.

4. (1) This Act applies to societies which are registered under this Act or deemed, by virtue of section 187 to be registered under this Act.

(2) No person other than a registered society shall trade or carry on business under any name or title of which the word “Co-operative” or “Co-operation” or any abbreviation thereof or the words “credit union” or “credit unions” or any abbreviation thereof, is a part.

Reference to Registrar

General.

Application of Act and use of the word “Cooperatives”.

5. For the purposes of this Act, a society conforms to the co-operative principles if:

- (a) no member or delegate has more than one vote;
- (b) no member or delegate is entitled to vote by proxy;
- (c) its business is carried on primarily for the benefit of its members;
- (d) its membership is voluntary and available without any artificial restriction or any unlawful basis of discrimination to any person who can use its services and is willing to accept the responsibilities of membership;
- (e) the limit on the interest or dividends on share capital that it pays does not exceed the prescribed rate;
- (f) any surplus or savings out of the co-operative's operations is used for one or more of the following purposes —
 - (i) to develop its business;
 - (ii) to provide or improve common services to members;
 - (iii) to be distributed among members in proportion to their patronage with the society;
 - (iv) to educate its members, officers or employees or the general public in the principles and techniques of economic and democratic co- operation;
 - (v) to be contributed to non-profit charitable benevolent organizations;
 - (vi) to be contributed to equity until total equity equals 10% of total assets; and
 - (vii) co-operation with other co-operatives is pursued.

PART I - REGISTRATION OF SOCIETIES

6. (1) There shall be a Director of Societies who shall perform such functions and shall have such powers as prescribed by this Act.

Co-operative principles.

Director of Societies and Staff.

(2) The Director of Societies shall have such professional and administrative staff as are determined by the Minister.

7. (1) The Director of Societies shall perform the following functions —

- (a) the registration of all societies;
- (b) the supervision of all societies;
- (c) the initiation and encouragement of organized activities for the development of societies;
- (d) the management of the Department of Cooperative Development; and
- (e) ensuring that records are kept up-to-date and that reports from societies are current.

(2) The Director of Societies may, in writing delegate a function specified in subsection (1) other than the function specified in paragraph (e), to an individual or organization and a function so delegated shall be performed in such a manner as the Director of Societies may determine.

8. (1) No society may commence or continue business unless it is registered under this Act.

(2) Subject to subsection (3), an application for registration under this Act must be submitted to the Director of Societies in the prescribed form.

(3) An application for registration under this Act must be signed —

(a) in the case of a society of which no member is a registered society, by at least ten members who satisfy the requirements for membership;

(b) in the case of a society of which a member is a registered society, by an authorised person on behalf of every such registered society, and where all the members of the society are not registered societies by at least ten other members;

(c) in the case of a society of which all the members are registered societies, by at least two such societies.

(4) An application made pursuant to subsection (1) shall be accompanied by —
Functions of Director of Societies. Application for registration.

(a) three copies of the proposed bye-laws of the society;

(b) the prescribed application fee; and

(c) such other information with respect to the society as the Director of Societies may require.

9. (1) Subject to subsections (2) and (3), no group may be registered or no society having been registered may continue to be so registered under this Act —

(a) unless its membership consists of individuals who are fifteen years and older;

(b) unless it is considered to be economically viable by the Director, having assessed the demand for its proposed services, the potential size of the society, the capital base and the membership use;

(c) unless there is conformity among membership, none of which is another society, with all cooperative principles as set out in section 5;

(d) unless the word “co-operative” forms a part of the name of each such society, and a society whose membership falls within the description contained in subsection (2) is called a junior co-operative society;

(e) unless the word “limited” is the last word of the name of a society to be registered with limited liability;

(f) if the name of the society is identical with that of another registered society or which so nearly resembles that name as to be likely to mislead the members of the public as to its identity;

(g) unless it has and maintains an address to which all notices and communications may be sent;

(h) unless its bye-laws are in conformity with this Act; and

(i) unless, within a reasonable time after the issue of the certificate of registration, the society paints or affixes its registered name in letters easily legible in a conspicuous position on the outside of every office or place in which the business of the society is carried on.

Conditions for registration.

(2) Notwithstanding subsection (1), the Director of Societies may register as a Junior Co-operative or Junior Society, a group, the substantial majority of whose members are under the age of fifteen years.

(3) In the case of a producer or service co-operative its membership must consist of at least ten members and in the case of a credit union, its membership must consist of at least thirty members.

10. (1) Once the Director of Societies is satisfied that the application is made in accordance with this Act, he shall register the society and its bye-laws and issue that society with a certificate of registration in the prescribed form.

(2) The Director of Societies shall cause the name under which a society is registered —

(a) to be published in the Gazette; and

(b) to be noted in the register known as the “Register of Societies” and which shall be kept at the office of the Director of Societies.

(3) Where the Director of Societies refuses to register a society he shall give the applicant reasons in writing for the refusal.

11. (1) A society comes into being on the date inscribed on the certificate of registration.

(2) A certificate of registration issued by the Director of Societies to a society is admissible in evidence as conclusive proof that the society named in the certificate is registered pursuant to this Act and has complied with all the requirements for registration under this Act.

(3) A society registered under this Act has the capacity to carry on its business in accordance with its byelaws.

(4) No society may engage in any business other than that which is connected with its objectives or which is reasonably incidental thereto.

12. The registration of a society shall render it a body corporate by the name under which it is registered with perpetual succession and with power to hold property, to enter into contracts, to institute and defend suits and other legal proceedings and to do all things necessary for the purposes of its bye-laws.

Registration of a Society. Effect of registration. A society to be a body corporate.

13. A society registered under this Act shall conform to the co-operative principles as set out in section 5.

14. (1) Every society shall have its certificate of registration prominently displayed at its registered address.

(2) Without prejudice to subsection (1), there shall be made available at all reasonable times at the registered address of the society —

- (a) a copy of this Act and any regulations made thereunder;
- (b) a copy of the bye-laws of the society; and
- (c) the register of members and such other records as may be prescribed.

15. (1) Subject to this Act, the Director of Societies may by order in writing suspend the registration of a society if the Director of Societies is satisfied that —

- (a) the society is in breach of any condition of registration;
- (b) the society is in breach of any requirement of section 13 or 14;
- (c) the society or any officer, board or committee member thereof has failed or refused to comply with any obligation imposed by this Act, the regulations or bye-laws; or
- (d) the society or any officer, board or committee member thereof has failed or refused to comply with any order or request made by the Director of Societies under this Act.

(2) The Director of Societies may by order in writing cancel the registration of any registered society if —

- (a) at any time it is proven that the number of members has been reduced to less than thirty members who are above the age of fifteen years in the case of credit unions and ten for other cooperatives;
- (b) it is proven that the registration has been obtained by fraud or mistake, but cancellation under paragraph (a) shall not apply to a society which includes among its members one or more registered societies.

Society to conform to cooperative principles. Display of certificate. Suspension and cancellation of registration.

(3) An order under subsection (1) or (2) shall take effect from the date of the order.

(4) No suspension or cancellation may be made by the Director of Societies until he has given the society an opportunity to be heard, and any suspension may not exceed twelve months.

(5) Where after a period of suspension a society has not rectified the circumstances leading to its suspension, the Director of Societies may cancel the registration of that society.

(6) Where the registration of a society is cancelled by order under this section the society shall, except for the purpose of winding up, cease to exist as a body corporate from the date on which the order takes effect.

16. (1) Every society shall be directed by a board which shall be constituted in accordance with the bye-laws of the society.

(2) A person may not constitute part of the management of a society who —

- (a) has been sentenced by a court in any country for any offence involving dishonesty and has not received a full pardon for that offence;
- (b) is in default of debts owed to a society or compounds with his creditors; or
- (c) is or becomes bankrupt.

17. (1) Without prejudice to section 16, the members of a society in each year shall: (a) elect members to fill the vacancies on the supervisory committee; and

(b) elect the majority of the members of the credit committee.

(2) The board shall appoint at least one member of the credit committee.

(3) Without prejudice to subsection (1), the board of a society may establish committees for the more efficient management of various aspects of the business or affairs of the society.

(4) A committee established for the purposes of subsection (3) may consist of a member of the board and other members of the society.

Board of Directors. Committees.

18. General meetings of members must be held in The Bahamas —

- (a) at the place provided in the bye-laws; or
- (b) where the bye-laws contain no provision, at the place determined by the directors.

19. (1) This section does not apply to a society that is continued pursuant to this Act.

(2) The provisional directors shall hold a meeting as soon as possible after the issue of the society's certificate of registration.

(3) The provisional directors may, at the meeting mentioned in subsection (2) —

- (a) pass resolutions establishing policies of the society;
- (b) adopt forms of corporate records;
- (c) authorise the issue of securities;
- (d) appoint officers;
- (e) appoint an auditor to hold office until the first general meeting of the members;
- (f) make banking or other financial arrangements;
- (g) appoint authorised signing officers;
- (h) adopt operating policies; and
- (i) transact any business in addition to that described in paragraphs (a) to (h).

(4) A provisional director may call the meeting of directors mentioned in subsection (2) by giving not less than five days' notice of the meeting to each provisional director, stating the time and place of the meeting.

(5) The notice mentioned in subsection (4) may be waived where all provisional directors are in attendance at the meeting of provisional directors.

20. (1) Within one month of the date of its registration, a society shall hold a general meeting at which all members are entitled to be present and to vote and this general meeting shall be considered its first annual general meeting.

General meetings. Organisation of meeting. First annual meeting.

(2) Notwithstanding subsection (1), where the directors apply to the Director of Societies, he may extend the time for holding the general meeting.

(3) The business at the first annual general meeting mentioned in subsection (1) must include —

- (a) the adoption of the bye-laws;
- (b) the election of directors; and
- (c) the appointment of an auditor.

(4) A society shall hold an annual general meeting in each year not later than five months after the end of the financial year of the society and within thirty days after acceptance by the board of directors of the annual audited financial report.

(5) The annual financial report must be made available to members at least seven days prior to the annual general meeting.

(6) The bye-laws may provide for holding semiannual or other periodic meetings.

21. (1) The directors may, at any time, call a special meeting of members.

(2) Subject to subsection (3), the directors shall call a special meeting of the members on receiving a written request, specifying the purpose of the meeting, from such number of members as may be specified in the bye-laws.

(3) The directors shall call the special meeting mentioned in subsection (2) within twenty days of receiving the written request and the special meeting is required to dispose of the specific business outlined in the request.

(4) The Director of Societies may call a special meeting of the society —

- (a) for the purpose of reporting to the members the results of any audit, examination or other investigation of the society's affairs ordered or made by him; or
- (b) where the society fails to hold an annual general meeting in accordance with subsection (1) or (2) of section 20, for the purpose of enabling members to secure any information regarding the affairs of the society that they are entitled to receive pursuant to this Act and to deal with any matters affecting the society.

22. (1) A society shall give at least ten days' notice of an annual or special meeting to its members —

- (a) by sending the notice by mail to the members at the address given in the register of members;
- (b) by publishing the notice in not less than two issues of a newspaper circulated in The Bahamas and posting the notice in a place that, in the opinion of the directors, is prominent and accessible to members; or
- (c) by way of electronic media.

(2) Notwithstanding any other provision of this Act, where a society is required to send a statement, agreement, proposal or other document to its members with a notice of a meeting and decides to publish the notice of a meeting in a newspaper pursuant to paragraph (1)(b), the society shall —

- (a) in the notice, inform the members of the document, giving a description of the document that, in the opinion of the directors, is adequate to describe its nature; and
- (b) make a copy of the document available to any member or delegate who requests it.
- (3) The notice of any special meeting must specify the purpose for which the meeting is being called.
- (4) The proceedings or the business transacted at a general meeting are deemed not to be invalidated by reason only of the non-receipt by a member of notice of the meeting.

23. (1) Subject to subsection (2), for the purpose of determining members —

- (a) entitled to receive payment of a bonus or dividend;
- (b) entitled to participate in a distribution on liquidation, the directors may fix in advance a date as the record date for the determination of members.

Notice of meetings. Record date.

(2) The record date mentioned in subsection (1) is not to precede by more than fifty days the particular action to be taken.

(3) Subject to subsection (4), for the purpose of determining members entitled to receive notice of and to vote at a general meeting, the directors may fix in advance a date as the record date for the determination of members.

(4) The record date mentioned in subsection (3) is not to precede by more than fifty days nor less than eleven days the date on which the meeting is to be held.

(5) Where the directors do not fix a record date —

(a) the record date for the determination of members entitled to receive notice of and to vote at a general meeting is —

(i) the close of business on the day immediately preceding the day on which the notice is given; or

(ii) if no notice is given, the day on which the meeting is held; and

(b) the record date for the determination of members for any purpose other than that described in paragraph (a) is deemed to be at the close of business on the day on which the directors plan a resolution relating to that purpose.

24. (1) Subject to subsection (2), the quorum at any annual, general or special meeting of members is that fixed by regulations.

(2) Where a quorum is not present one hour after the time fixed for the commencement of an annual, general or special meeting of members, the Director of Societies shall summon a meeting at a time and place as the Director of Societies may determine but that meeting shall not be held less than fourteen or later than thirty days after the date of the originally scheduled meeting.

(3) At a meeting summoned by the Director of Societies pursuant to subsection (2) any number of members present at such meeting shall constitute a quorum.

25. (1) Where the bye-laws of a society provide for the nomination and appointment of delegates to a general meeting —

(a) the delegates shall exercise the powers of membership at any annual or special meeting; and

(b) any reference in this Act with respect to the exercise of any power mentioned in paragraph (a) shall be construed as a reference to delegates.

(2) The members who elect delegates may, at a special meeting called for that purpose or at an annual general meeting —

(a) remove the delegates in any manner provided for in the bye-laws; or

(b) notwithstanding subsection (1), amend the byelaws to eliminate the nomination and appointment of delegates.

PART II - RIGHTS AND LIABILITIES OF MEMBERS

26. (1) A person, other than a registered society, qualifies for membership of a society of his choice if that person —

(a) is either a citizen or a resident of The Bahamas;

(b) has attained the age of fifteen;

(c) is of sound mind;

(d) has with the other members of the society some common bonds of philosophy, occupation or association or of residence in a defined neighborhood or district; and

(e) in the case of a Junior Co-operative, is a member of a school, youth club or any other like organization.

(2) Subject to the approval of the Director of Societies —

(a) a registered society may be a member of a society; or

(b) a person may be a member of more than one society with similar objectives.

(3) A purchaser under any execution or any other person succeeding by operation of law or otherwise to the share or interest of another member in a society shall not be entitled to membership by virtue only of such purchase or transfer.

(4) A person, including a minor, who is duly admitted membership shall enjoy all the rights of that society and shall be subject to all the liabilities of membership and any other liabilities existing in law.

(5) Without prejudice to anything contained in this section, provision may be made in the bye-laws of a society respecting membership.

27. An application for membership of a society must be submitted to the board of the society in the approved form.

28. (1) No person may exercise the rights of membership of a society unless and until he has paid the prescribed membership fee and has satisfied any other requirement which may be prescribed by the bye-laws.

(2) A registered society shall keep a register of members and shares in which shall be recorded —

(a) the names and addresses of members and the number of shares held by each member; and

(b) the date on which each member became a member, and the date if any, on which he ceased to be a member.

29. (1) A member of a society may at any time withdraw from membership on such condition as may be prescribed by the bye-laws or regulations.

(2) Withdrawal from a society shall be by written notice addressed to the secretary of the board.

(3) Withdrawal from a society does not affect any existing liability of the member of the society.

30. (1) There shall be no voting by proxy and subject to any provision in the bye-laws relating to the voting rights of members who are themselves other societies, a member of a society shall have one vote except where such member is the Chairman of any meeting of the society in which case if there is an equality of votes he shall have a casting vote in addition to his original vote.

(2) A society that is a member of another society shall exercise its voting rights in that other society through one of its members duly appointed in that behalf.

31. (1) Subject to this Act, the liability of a current member of a society is limited to the paid up amount of his qualifying and equity shares.

(2) The liability of a past member or the estate of a deceased member for the debts of a society as they existed on the date on which such member ceased to be a member or died shall continue for a period of two years after the cessation of membership or death.

PART III - BUSINESS OF SOCIETIES

32. (1) A registered society with a share capital may sell shares to its members but such shares shall have their par value set out in the bye-laws of the society.

(2) Unless a society is required by law to have limited shareholding, a society shall have an unlimited number of equity shares.

(3) A society shall sell its shares at their par value.

(4) A society shall issue qualifying shares, and may issue equity shares.

(5) A share in a society is personal property and a shareholder is entitled to an annual statement showing the number of shares that he owns.

33. Where the liability of the members of a society is limited by shares, no member, except where a registered society is a member of that society, may hold more than one-fifth of the outstanding paid up shares of that society.

34. Where a member of a society fails to transact business with that society for a period of one year, that member's qualifying shares and deposits accounts may be transferred to a dormant account that may be reactivated in a manner prescribed by regulations.

35. (1) A share may be transferred to any other member at the option of the transferor, but where the transferee is not a member, the board, or the general meeting, according to the bye-laws relating to the admission of members must approve that transfer before the transfer can be registered.

(2) A transfer of shares shall be effected in such form as the Director of Societies determines.

(3) No transfer of a share shall be valid and effective unless and until such transfer has been registered by the Secretary on the direction of the board.

(4) No transfer of a share shall be registered without the written permission of the board where that transfer is made by a member indebted to the registered society, and where that transfer of a share is registered by the transferee, any claim by the society upon the transferor is not affected by the transfer.

36. (1) Where a member or person claiming through a registered society is of unsound mind or is incapable of managing his affairs and no committee, receiver or guardian has been appointed, the society may, subject to this section and section 35, transfer the share or interest of such member to any person nominated by such member for the purposes of section 39 or may pay to the person nominated a sum representing the value of the share or interest of such member ascertained in accordance with subsection (5).

(2) Subject to subsection (3), if no nominee has been appointed, the society may pay a sum representing the value of the member's share or interest to the Registrar of the Supreme Court.

(3) If the value of the share or interest does not exceed five hundred dollars, the board may, subject to any conditions it thinks fit, pay the whole or any portion of such sum to the person who appears to have the care of such member or the management of his affairs.

(4) A transfer and payment made by a registered society in accordance with this section shall be valid and effective against any demand made upon the society by any person.

(5) For the purposes of this section, the value of any share or interest (including group insurance, where applicable) shall be represented by the sum actually paid for that share or interest by the member holding it unless the bye-laws of the society otherwise provide.

37. (1) A registered society has a lien on the shares or amount outstanding to the credit of a member or his legal representative for a debt due by that member or shareholder to that society.

(2) A registered society may enforce a lien mentioned in subsection (1) in the manner set out in its bye-laws.

(3) The board may, in default of payment by any member indebted to a registered society, apply the sum paid up for the time being on any equity shares or deposits held by the member in or toward the discharge of the debt so due and in any expense in or about the same, and the defaulting member shall cease to have any further claim in respect of such shares and or deposits.

38. (1) Subject to subsection (2), the transfer of a share or interest of a member or deceased member in the capital of a society shall be subject to such conditions as may be prescribed by or under this Act.

(2) No share or interest or any part thereof in the capital of a society may be transferred unless the transfer is made to a member thereof or to a person whose application for membership has been accepted.

39. (1) A member of a society may, by instrument in writing signed by such member in the presence of two attesting witnesses and delivered at or sent to the registered office of the society during the lifetime of such member or made in any book kept at the registered office, nominate any person to or among whom there shall be transferred at his death such property in the society of which he is the owner at the time of his death, or as may have accrued thereon, whether in shares, or deposits, or so much thereof as is specified in such nomination if the nomination does not comprise the whole.

(2) A nomination made pursuant to subsection (1) may be revoked or varied by a subsequent nomination, signed, attested and delivered or sent or made as aforesaid, or by any similar document in the nature of a revocation or variation signed by the nominator in the presence of two attesting witnesses and delivered, sent or made as aforesaid but any such nomination may not be revoked or varied by the will of the nominator or by any codicil thereto.

(3) All nominations and all revocations or variations thereof delivered or sent to a society shall be recorded in a book kept at the registered office of the society.

40. (1) Where a person has been nominated as beneficiary by a member in accordance with the bye-laws of a society and such nominee is admitted to membership in that society, the society shall within one year of the death of the member by whom the nomination was made, transfer the share or interest of the deceased member to the limit specified in subsection (4) to the nominee.

(2) Where no nominee is admitted to membership in the society or where the deceased member made no such nomination, the society shall within one year of the death of such deceased member pay to the nominee or legal personal representative of the deceased member as the case may be, such sum, not exceeding the said limit, representing the value or part thereof of the deceased member's shares or interest in the society.

(3) Nothing in this section shall be construed as prohibiting a nominee who has been admitted to membership from electing to receive payment representing the value of the deceased member's shares or interest instead of accepting a transfer.

(4) Subject to section 31, and unless prevented by order of a court of competent jurisdiction, a society shall pay such nominee or legal personal representative as the case may be, the sum due to the deceased member from the society.

41. (1) A registered society which has as one of its objects the disposal of any article or produce obtained by the work or industry of its members, may by its bye-laws or otherwise contract with its members —

(a) that every such member who produces any such article shall dispose of the whole or any specified amount, portion or description thereof to, or through the society;

(b) that any member who is proved or adjudged to be guilty of a breach of the bye-laws or contract shall pay to the society liquidated damages in a sum ascertained or assessed in such manner as may be prescribed in the bye-laws.

(2) In the event of any breach or the intended breach by a member of any registered society of any provision of a contract made in accordance with this section, such society shall be entitled to an injunction to restrain such member, his agent and servants from selling or delivering the agricultural or manufactured products otherwise than in accordance with the contract and to a decree of specific performance of the said contract by such member.

(3) Pending the adjudication of any action brought by any society under this section and upon ex-parte application to the Supreme Court and upon evidence by affidavit of the breach or threatened breach and upon giving of suit or undertaking of security as may be approved by the Supreme Court, the society shall be entitled to an interim injunction restraining such breach or threatened breach.

(4) A contract entered into under this section shall not be questioned in any court on the ground only that it is a contract in restraint of trade.

42. (1) A person to whom money has been lent by a society or who is otherwise indebted to the society may be required to create a charge in favour of the society in such form as may be prescribed.

(2) A charge shall, so long as it continues in force, confer on the society the following obligations —

(a) the right upon the happening of any event specified in the charge as being an event authorising the chargee to seize the property subject to the charge to take possession of any property so subject;

(b) after an interval of five clear days or such less time as may be specified in the charge from the date of taking possession of any property subject to the charge, to sell such property either by auction or, if the charge so provides, by private treaty and either for a lump sum or payment by installments;

(c) to apply the proceeds of sale in or towards discharge of the debt secured by the charge and the costs of seizure and sale and to pay any surplus of such proceeds to the member whose property was sold.

(3) A charge shall, so long as it continues in force, impose on the member the obligation to pay to the society towards the discharge of his indebtedness the proceeds of sale of any property comprised in the charge or any money received under a policy of insurance or by way of compensation in respect of any such property, except insofar as the charge otherwise allows.

(4) For the avoidance of doubt, it is hereby declared that a charge under this section is not a bill of sale within the meaning of the Sale of Goods Act.

43. (1) A charge created under section 42 shall be duly executed if the person to whom money has been lent signs four copies of the document evidencing the charge in the presence of —

(a) the secretary of the society and/or;

(b) the manager or loan officer of the society.

(2) The secretary shall file one copy of the charge, transmit one copy to the Registrar General, one copy to the Director of Societies, and deliver one copy to the member.

(3) The Registrar General shall keep a book to be known as the "Registered Societies Charges Book" in which he shall register every charge transmitted to him by the society, and issue to the society a certified copy of the registration.

(4) The registration of a charge under subsection (3) shall constitute a first charge and security in favour of the society and shall be deemed to affect with notice any person dealing with property comprised in the charge.

(5) Where a loan or other indebtedness in respect of which a charge was created is discharged, the secretary, manager or loan officer of the society shall —

(a) cause four copies of a document to that effect to be prepared indicating that the charge has been discharged;

(b) file one copy of such document and transmit one copy to the Registrar General who shall forthwith make an entry of satisfaction in the Registered Societies Charges Book; and

(c) deliver one copy to the Director of Societies and one copy to the member.

(6) Any person may, on payment of the prescribed fee, inspect the Registered Societies Charges Book and take extracts therefrom.

(7) Notwithstanding anything contained in this section, every charge subsisting at the commencement of this Act in favour of a registered society, shall be deemed to be registered in the Registered Societies Charges Book and any such charge shall, without prejudice to anything contained therein, have the same force and effect as a charge created under this Act.

44. Nothing in section 42 shall affect —

(a) any claim of the Government in respect of taxes or money recoverable as such or of a landlord in respect of rent or money recoverable as rent;

(b) the rights of any bona fide purchaser for value without notice of the charge; or

(c) the rights of any prior charge.

45. (1) Subject to any claim in respect of debts due to the Government or to a landlord in respect of rent or any money recoverable as rent, any debt or outstanding demand to a society by a member or past member shall notwithstanding anything contained in section 42 be a first charge —

(a) upon the crops or other agricultural produce whether standing or severed, raised in whole or in part with the loan from the society by such member or past member; and

(b) upon any cattle or other livestock, fodder for the same, agricultural or industrial machinery or implements, or raw materials for use in manufacture or handicraft, or buildings used for the purposes of agriculture or industry, or fishing or fish processing equipment supplied to or purchased by such member or past member in whole or in part from any loan whether in goods or money granted him by the society.

(2) Any person dealing with any of the property specified in subsection (1) shall be deemed to have notice of such first charge and all such dealing shall be subject to the charge and priority created by this Act.

46. A society may enforce a charge by applying to a Magistrate of the district in which the member resides or carries on business or where the property subject to the charge is situated for a warrant of distress by certifying under seal to the Magistrate the amount due and particulars of the property so charged and the Magistrate shall issue a warrant of distress and may order the sale of the property by public auction or private treaty.

47. (1) A society may borrow from any other society or from any bank approved by the Director of Societies on the security of any charge executed and registered in accordance with section 43 and may for this purpose assign any such charge to the other society or bank.

(2) An assignment of a charge under this section shall be registered in the same manner as a charge under section 43 and that section shall apply *mutatis mutandis* to an assignment of a charge so registered.

(3) An assignment or charge when registered shall operate as a first charge in favour of the assignee subject to section 36.

(4) Where any charge is assigned to a society established with the object of facilitating the operations of other societies, that society may borrow from any bank approved by the Director of Societies and for this purpose may re-assign any such charge to such bank and subsections (2) and (3) shall apply *mutatis mutandis* to such re-assignment.

48. (1) A society may require a member or officer to give a bond with or without surety as additional security for repayment of any loan and any condition thereby imposed on the member or officer relating to the payment of capital and interest shall be strictly observed and performed and on breach of any such condition the bond shall be forthwith forfeited.

(2) Section 47 relating to the assignment of charges shall apply *mutatis mutandis* to the assignment of bonds.

PART IV - DIRECTORS AND OFFICERS

49. (1) On registration of the society, the individuals whose names appear in the application for registration as having been appointed and having consented to act as provisional directors —

- (a) are deemed to have all the powers and duties of directors; and
- (b) shall hold office until the first general meeting.

(2) After the first general meeting, the directors must be appointed in accordance with the Act, the regulations and the bye-laws.

50. (1) Subject to this Act, the regulations and the bye-laws, the board of directors, however designated, shall —

- (a) exercise the powers of the society directly or indirectly through the employees and agents of the society; and

(b) direct the management of the business and affairs of the society.

(2) All directors must be citizens or residents of The Bahamas.

51. (1) The board of directors may, from time to time —

- (a) appoint from among its number any committee it considers necessary; and

(b) by resolution delegate to any committee any powers that it considers necessary for the efficient conduct of the affairs and business of the society.

(2) A committee of directors that has powers delegated to it pursuant to subsection (1)(b) must consist of at least three directors.

(3) A member of a committee holds office until —

- (a) his removal by resolution of the board of directors;
- (b) he ceases to be a member of the board of directors; or
- (c) the dissolution of the committee.

(4) A committee may exercise any powers of the board of directors that are delegated to it by resolution of the board, subject to any restrictions contained in the resolution.

(5) Notwithstanding subsection (4), no committee of directors may —

- (a) fill a vacancy among the directors;
- (b) declare a bonus or dividend;
- (c) approve any financial statements of the society;
- (d) submit to the members any question or matter requiring the approval of members; or
- (e) make decisions where this Act or the bye-laws require a two-thirds majority or unanimous vote of the board of directors.

(6) A committee shall —

- (a) fix its quorum at a majority of its members;
- (b) keep minutes of its proceedings; and
- (c) submit to the board of directors, at each meeting of the board, the minutes of the committee's proceedings during the period since the most recent meeting of the board.

52. (1) Subject to the regulations and the bye-laws —

(a) the election of directors must take place annually at the annual general meeting, and the directors are eligible for re-election;

(b) the directors hold office until the conclusion of the meeting at which their successors are elected;

(c) where the number of nominees exceeds the number of directors to be elected, the election of directors is required to be by secret ballot;

(d) every member has the right to vote for the number of directors to be elected, and any ballot that contains the names of more than the number to be elected is void;

(e) where there is a vacancy on the board of directors, and —

(i) there is a quorum of directors, the remaining directors may exercise all the powers of the directors, or fill the vacancy until the next annual general meeting;

(ii) there is not a quorum of directors, the remaining directors shall call a general meeting for the purpose of electing members to fill any vacancies; and

(f) where there are no directors remaining, such number of members as may be specified in the bye-laws, may in writing appoint directors solely for the purpose of calling a general meeting to elect members to fill the vacant directorships or the Director of Societies may call such meeting.

(2) Where an election of directors required by this Act, the regulations or the bye-laws does not take place at the proper time, the directors then in office shall continue in office until their successors are elected.

53. An individual is not eligible to be a director if he —

(a) is less than eighteen years of age or, in the case of a junior co-operative he is less than sixteen years of age;

(b) is of unsound mind and has been so found by a court in The Bahamas;

(c) is not a member of the society or a duly appointed representative of a member society;

(d) has the status of a bankrupt;

- (e) is an employee of the Department of Co-operative Development;
- (f) is an employee of a society, except where he is an employee in a workers' society; and
- (g) is thirty days or more in arrears in his obligations to the society.

54. (1) Subject to the bye-laws, directors of a society may without authorisation of the members —

- (a) borrow money on the credit of the society;
- (b) issue, re-issue, sell or pledge debt obligations of the society;
- (c) subject to section 48, give a guarantee on behalf of the society to secure performance of an obligation of any person; and
- (d) mortgage, charge, hypothecate, pledge or otherwise create a security interest in all or any property of the society owned or subsequently acquired, to secure any debt obligation of the society.

(2) A sale, or exchange of all or substantially all of the property of a society, other than in the ordinary course of business of the society, must be approved by the members in the manner provided in subsections (3) to (8).

(3) The directors shall send, in the manner provided in section 21, a notice of a special meeting to consider the sale, or exchange mentioned in subsection (2) to each member.

(4) The notice mentioned in subsection (3) must include or must be accompanied by a copy or summary of the agreement of sale, or exchange mentioned in subsection (2).

(5) At a special meeting held pursuant to this section, the members may, by special resolution —

- (a) authorise the sale, or exchange mentioned in subsection (2); and
 - (b) fix, or authorise the directors to fix, any terms and conditions of sale or exchange.
- (6) Each member of the society has the right to vote with respect to a sale or exchange mentioned in subsection (2).
- (7) A sale or exchange mentioned in subsection (2) is adopted when the members have approved the sale or exchange by a special resolution.
- (8) A sale or exchange may be abandoned by the directors where they are so authorised in a special resolution by the members.

55. (1) Subject to the bye-laws, where all the directors consent, a meeting of directors or a committee of directors may be held by means of —

- (a) a telephone system; or
 - (b) a communication facility other than telephone, that permits all persons participating in the meeting to hear and speak to each other, and a person so participating is deemed to be present at that meeting.
- (2) Unless this Act, the regulations or the bye-laws require a meeting, a resolution of the directors may be passed without a meeting where —
- (a) all directors are notified in writing, and two-thirds of them consent to the resolution in writing; and
 - (b) the consent is filed with the minutes of the proceedings of the directors.

56. (1) The directors shall cause minutes to be kept of —

- (a) all appointments of officers and committee members made by them;
 - (b) all the names of the directors present at each meeting of the directors; and
 - (c) all resolutions and proceedings at meetings of the society of the directors.
- (2) Every committee of the society shall cause minutes to be kept of —
- (a) the names of the committee members present at meetings of the committee; and
 - (b) all proceedings and resolutions of the committee.
- (3) The directors shall cause true accounts to be kept of —
- (a) all sums of money received and expended and matters with respect to which the receipts and expenditures take place;
 - (b) the assets and liabilities of the society; and
 - (c) every other transaction affecting the position of the society.

57. (1) A director of a society ceases to hold office when he —

- (a) dies or resigns;
 - (b) is removed in accordance with section 58;
 - (c) is no longer qualified pursuant to section 53; or
 - (d) acts contrary to section 66.
- (2) A resignation of a director becomes effective at the latter of —
- (a) the time a written resignation is sent to the society; and
 - (b) the time specified in the resignation.

58. (1) Subject to the regulations and bye-laws, the members of a society may, by special resolution remove any director from office.

(2) A vacancy created by the removal of a director may be filled at the meeting of the members at which the director is removed or, where not so filled, may be filled pursuant to section 52(1)(e).

59. (1) A director of a society is entitled to receive notice of and to attend and be heard at every meeting of members.

(2) Where a director —

(a) resigns;

(b) receives a notice or otherwise learns of a meeting of members called for the purpose of removing him from office; or

(c) receives a notice or otherwise learns of a meeting of directors or members at which another person is to be appointed or elected to fill his office, whether because of his resignation or removal or because his term of office has expired or is about to expire, he is entitled to submit to the society a written statement giving the reasons for his resignation or the reasons he opposes any proposed action or resolution.

(3) A society shall immediately send a copy of the statement mentioned in subsection (2) to the Director of Societies and shall make available a copy of the statement to every member.

(4) No society or person acting on its behalf incurs any liability by reason only of circulating a director's statement sent in compliance with subsection (3).

60. The members of a society may amend the byelaws to vary the number of directors, but no amendment to decrease the number of directors affects an incumbent director.

61. (1) Within thirty days after a change in directors is made, a society shall send to the Director of Societies a notice in the prescribed form setting out the change and the Director of Societies shall file the notice.

(2) Notwithstanding subsection (1), where a society sends the annual return required from an election at an annual general meeting within thirty days after a change is made in its directors, it is not required to send the notice required in this section.

62. (1) Subject to the bye-laws, the directors may meet at any place, and on any notice that they consider appropriate.

(2) The president —

(a) may call a meeting of directors at any time; and

(b) on the written request of at least two directors, shall call a meeting within fourteen days of the receipt of the request.

(3) A majority of the directors constitute a quorum at any meeting of directors.

(4) Subject to the bye-laws, a notice of a meeting of directors need not specify the purpose of or the business to be transacted at the meeting.

(5) A director may in any manner waive a notice of a meeting of directors.

(6) For the purpose of subsection (5), attendance of a director at a meeting of directors is not deemed to be a waiver of notice of the meeting, unless the director attends the meeting for the express purpose of objecting to the transaction of any business on the ground that the meeting is not lawfully called.

(7) Where the time and place of an adjourned meeting is announced at the original meeting, notice of an adjourned meeting of directors is not required to be given.

63. An act of a director or officer is valid notwithstanding an irregularity in his election or a defect in his qualification.

64. (1) No director and no member of a committee is entitled to be paid any remuneration in connection with his duties as a director or committee member on behalf of a society or his attendance at meetings.

(2) Directors and members of committees may be reimbursed for expenses incurred by reason of the performance of their duties and functions as directors or members of committees.

(3) A society may purchase and maintain insurance for the benefit of a director, member of a committee, officer or employee against a liability, loss or damage incurred by that person while serving the society in the capacity of director, member of committee, officer or employee.

65. Subject to section 70 and the bye-laws, the directors shall fix the salary of any employees appointed by them.

66. Every director and officer of a society in exercising his powers and discharging his duties shall —

(a) act honestly and in good faith with a view to the best interests of the society; and

(b) exercise the care, diligence and skill that a reasonably prudent person would exercise in comparable circumstances.

67. A director or officer, or an associate of a director or officer, who, in connection with a transaction relating to shares of a society or a debt obligation of a society, makes use of confidential information for the benefit or advantage to himself or an associate that, if generally known, might reasonably be exercised to affect materially the value of the share or the debt obligation —

(a) is liable to compensate any person for direct loss suffered by the person as a result of the transaction, unless the information was known or reasonably should have been known to the person at the time of the transaction; and

(b) is accountable to the society for any direct benefit or advantage received or receivable by him or his associate, as the case may be, as a result of the transaction.

68. (1) Where directors vote for or consent to, a resolution authorising or approving by any other means —

(a) the purchase of shares contrary to section 76;

(b) the payment of a dividend on shares contrary to section 84;

(c) the payment of a bonus contrary to section 84;

(d) a loan or guarantee or the giving of financial assistance contrary to section 77;

(e) a payment of an indemnity described in section 69 to a director or a former director, without the approval of the court required by subsection (3) of that section; or (f) an act not consistent with the purpose of the society as set out in its bye-laws and with respect to which the society has paid compensation to a person, the directors are jointly and severally liable to make good any loss or damage suffered by the society.

(2) On the application of a director, the court may declare whether or not, having regard to any of the circumstances the court considers appropriate —

(a) the society is insolvent; or

(b) the payment of a bonus or dividend or the lending of money would make a society insolvent.

(3) The liability imposed in subsection (1) is in addition to and not in derogation from a liability imposed on a director by another enactment or law.

(4) For the purposes of this section, a director who is present at a meeting of directors or of a committee of directors is deemed to have cast an affirmative vote, given consent to a resolution or given the approval mentioned in subsection (1), unless —

(a) the director's dissent is entered in the minutes of the meeting; or

(b) the director's written dissent is —

(i) delivered to the secretary of the meeting before its adjournment; or

(ii) delivered or sent by registered mail to the registered office of the society immediately after the adjournment of the meeting.

(5) A director who votes for a resolution mentioned in subsection (1) is not entitled to dissent under subsection (4).

(6) Where a director is not present at a meeting of directors or of a committee of directors at which a vote, resolution or approval mentioned in subsection (1) is cast or given, he is deemed to have cast an affirmative vote, consented to the resolution or given approval, unless, within fourteen days after becoming aware of the proceedings, the director delivers or sends by registered mail his written dissent to the registered office of the society.

(7) On receipt of a written dissent, the Secretary of the society shall —

(a) certify on the written dissent the date, time and place it is received; and

(b) keep the written dissent with the minutes of the meeting at which the resolution was passed.

(8) No action to enforce a liability imposed by subsection (1) is to be commenced after five years from the date of the meeting at which the vote, resolution, or the approval was taken or given.

(9) In an action to enforce a liability imposed in subsection (1), the court may, on the application of the society —

(a) join as a defendant a person who received a benefit as a result of the resolution complained of; and

(b) make the person mentioned in paragraph (a) liable to the society jointly and severally with the directors to the extent of the amount paid to him.

(10) A director is not liable under subsection (1) where he —

(a) proves that he did not know or could not reasonably have known that the act authorised by the resolution was contrary to this Act; or

(b) relies and acts in good faith —

(i) on statements of fact represented to him by an officer of the society to be correct; or

(ii) on statements contained in a written report or opinion of the auditor of the society or a professional person engaged by the society who is competent to give advice in respect of the matter.

(11) A director who is found liable pursuant to subsection (1) is entitled to apply to a court for an order compelling a member or other recipient to pay or deliver to the director any money or property that was paid, distributed to the member, or other recipients contrary to sections 69, 76, 77 or 84.

(12) In connection with an application pursuant to subsection (11) and where the court is satisfied that it is equitable to do so, it may —

(a) order a member or other recipient to pay or deliver to a director any money or property that was paid or distributed to a member or other recipient contrary to sections 69, 76, 77 or 84;

(b) make any order, other than that described in paragraph (a), that it considers appropriate.

69. (1) Subject to subsections (2) and (3), a society may indemnify —

(a) a director or officer of the society;

(b) a former director or officer of the society; or

(c) a person who acts or has acted at the request of the society as a director or officer of a body corporate of which the society is or was a member or a creditor, against costs, charges, and expenses including an amount paid to settle an action or satisfy a judgement, reasonably incurred by that person with respect to a civil, criminal or administrative action or proceeding to which that person is made a party by reason of his being or having been a director or officer of the society or body corporate.

(2) A society may indemnify a director, officer, or other person only where that person —

(a) acted honestly and in good faith with a view to the best interests of the society; and

(b) in the case of a criminal, civil or administrative action or proceeding that is enforced by a monetary penalty, had reasonable grounds for believing that the conduct was lawful.

(3) No society shall indemnify a director, officer or other person mentioned in subsection (1) with respect to an action by or on behalf of the society to obtain a judgement in its favour to which that person is made party by reason of his being or having been a director or an officer of the society, against costs, charges and expenses reasonably incurred by that person in connection with the action unless —

(a) the society has the approval of the court; and

(b) that person fulfills the conditions described in subsection (2).

(4) Notwithstanding subsections (1) to (3), a society shall indemnify a director, officer or other person mentioned in subsection (1) who has been substantially successful in the defence of a civil, criminal, or administrative action or proceeding to which that person is made a party by reason of his being or having been a director or officer of the society or body corporate against costs, charges and expenses reasonably incurred by that person with respect to the action or proceedings.

(5) A society or a director, officer or other person mentioned in subsection (1) may apply to the court for an order approving the indemnity and the court may make the order.

(6) On an application pursuant to subsection (5) the court may order notice to be given to an interested person, and that interested person is entitled to appear and be heard in person or by an attorney-at-law.

70. The provisions of a contract, the bye-laws or the circumstances of his appointment do not relieve a director from —

(a) the duty to act in accordance with this Act and the regulations; and

(b) liability that by virtue of a rule of law would otherwise attach to him with respect to negligence, default, breach of duty or breach of trust of which he may be guilty in relation to the society.

71. (1) This section does not require the disclosure of an interest in a contract or transaction that is of a type available to and customarily entered into between the society and its members.

(2) A director or officer of a society who —

(a) is a party to a material contract or proposed material contract with the society; or

(b) is a director or an officer of, or has a material interest in, a person who is party to a material contract or proposed material contract with the society, shall disclose in writing to the society, or request to have entered in the minutes of meetings of directors, the nature and extent of his interest.

(3) The disclosure required by subsection (2) must be made in case of a director —

(a) at the meeting at which a proposed contract is first considered;

(b) if the director was not then interested in a proposed contract at the first meeting after he becomes so interested;

(c) if the director becomes interested after a contract is made, at the first meeting after he becomes so interested; or

(d) if a person who is so interested in a contract becomes a director, at the first meeting after he becomes a director.

(4) The disclosure required by subsection (2) must be made in the case of an officer who is not a director —

(a) forthwith after he becomes aware that the contract or proposed contract is to be considered or has been considered at a meeting of directors;

(b) if the officer becomes interested after a contract is made, forthwith after he becomes so interested; or

(c) where he has an interest in a contract before becoming an officer, immediately after he becomes an officer.

(5) If a material contract or proposed material contract is one that in the ordinary course of the society's business would not require approval by the directors or members, a director or officer shall disclose in writing to the society or request to have entered in the minutes of meetings of directors the nature and extent of his interest after he becomes aware of the contract or proposed contract.

(6) A director referred to in subsection (2) may take part in discussions to consider, or vote on a resolution to approve, a contract that he has an interest in, if the contract —

(a) is an arrangement by way of security for money lent by him to the society or obligations undertaken by him for the benefit of the society or a member of the society;

(b) is a contract for indemnity or insurance pursuant to section 69; or

(c) is a contract with an affiliate.

(7) Where a director is not entitled to vote at a meeting pursuant to subsection (2) and his presence is requested to constitute a quorum at a meeting of directors, a decision of the directors is deemed not to be invalid only by reason of the absence of the director.

(8) For the purpose of this section, a general notice to the directors by a director or officer declaring that he is to be regarded as interested in any contract made with that person is sufficient declaration of interest in relation to any contract made with that person.

(9) Where —

(a) a director or officer discloses his interest in accordance with this section; and

(b) the contract in which the director or officer has a material interest;

(i) is approved by the directors or members; and

(ii) is reasonable and fair to the society at the time it was approved, the material contract is neither void nor voidable by reason only of that relationship or by reason only that a director with an interest in the contract is present at or is counted to determine the presence of a quorum at a meeting of directors or committee of directors that authorised the contract.

(10) Where a director or officer of a society fails to disclose his interest in a material contract in accordance with this section, a court may, on the application of a society or a member of the society, set aside the contract on any terms that the court considers appropriate.

72. (1) A society —

(a) is required to have a chairman, officers and a secretary; and

(b) may have any officers in addition to those mentioned in paragraph (a) that are provided for in the bye-laws.

(2) Subject to section 163 and to the bye-laws —

(a) the directors may designate the officers of the society, appoint persons as officers, specify the officers' duties and delegate persons to manage the business and affairs of the society; and

(b) a director may be appointed to any office of the society.

(3) Subject to the bye-laws, no person shall be chairman or vice-chairman of a society unless he is a director of the society.

73. The directors of a society —

(a) shall, in the case of a society that is organised and operated as a consumers' society as defined in section 143; and

(b) may, in the case of any other society, require that every person appointed to an office who receives, manages or handles goods, wares or merchandise or manages or handles the expenditure of money on behalf of the society shall give to the directors, before commencing his duties as an officer, security or a bond in the prescribed amount.

74. A society may by resolution passed by a majority of the members at an annual or special meeting, require all directors and officers to sign annually or at any other time that may be specified in the resolution a declaration relating to —

(a) faithful performance of duties;

(b) secrecy of transactions with members; and

(c) faithful and loyal support of the society.

75. A declaration made pursuant to section 74 shall be filed within five days of the making thereof with the Director of Societies.

PART V - PROPERTY AND FUNDS OF SOCIETIES

76. A society may invest or deposit its funds —

- (a) in any registered society or bank approved by the Director of Societies;
- (b) in any securities issued or guaranteed by the Government;
- (c) in the shares or on the security of any other institution with limited liability approved by the Director of Societies; or
- (d) in any other manner permitted by the Director of Societies.

77. (1) A society may make advances by way of loans to its members.

(2) Except for a loan to another society, no loan may be made to a person who is not a member of that society.

(3) Loans to directors, committee members, employees, or associates thereof, and any limited company or partnership of which they are a principal stakeholder shall require approval as prescribed.

(4) No loan may be made to a director, committee member, employee or associate thereof, nor any limited company or partnership of which they are a principal stakeholder except to the extent determined in accordance with the credit policy applicable to the Society.

(5) A loan made in contravention of subsection (4) shall be void and shall be repaid to the society immediately.

78. (1) Subject to the provision of any bye-laws of a society, a society may receive deposits and loans from persons who are not members of the society for the purpose of meeting any of its obligations or discharging any of its functions under this Act.

(2) A society may by mortgage or in any other manner it deems appropriate guarantee the repayment of any sums received by it pursuant to subsection (1).

79. (1) A society may receive deposits from a minor and pay to such a minor any such deposit together with the interest accrued thereon.

(2) Any deposit made on behalf of a minor may together with any interest accrued thereon be paid to the parent of the minor or, where the minor is under the care of a guardian to such guardian for the use of the minor.

(3) For the purposes of this section the mother of a minor born out of wedlock is the guardian of such infant except where —

- (a) there is subsisting a court order depriving her of the custody of such minor, in which case the guardian shall be the person named in the court order; or
- (b) the minor customarily resides with some person other than the mother in which case that person shall be the guardian.

(4) The receipt by a minor or his parent or guardian as the case may be, for money received under this section shall be a good and sufficient discharge of the liability of the society in respect of that money.

(5) Where a person under disability other than a minor is entitled to receive from a society any money whatsoever such money may be paid by the society —

- (a) to the Registrar of the Supreme Court to the credit of such person under such disability;
- (b) to the credit of such person under disability, and the receipt of the Registrar of the Supreme Court or of the person under disability, as the case may be, shall be a good and sufficient discharge of the liability of the society to pay that money.

(6) The Registrar of the Supreme Court may retain out of any money so paid to him a sum not exceeding one per cent thereof for fees of office and shall pay or apply the remainder to or for the care, maintenance, education or benefit of such person under disability.

80. A society shall not borrow funds in excess of the amount specified in its bye-laws.

81. (1) Where a society realises an annual profit from its transactions, that society shall establish and maintain a statutory reserve fund.

(2) Every society shall be required to set aside the greater of one half of one percent of assets or twenty-five percent of surplus into a statutory reserve until that statutory reserve equals ten percent of the total assets of the society as shown in the audited financial statements for the financial year. Where a society cannot meet its statutory reserves allocation requirements, it may apply to the Director of Societies for an exemption.

(3) Every society shall ensure that the proceeds of the statutory reserves, liquidity, stabilization and development funds are deposited with and administered by the Apex Body in such a manner as may be prescribed by the regulations and bye-laws.

(4) Every society shall ensure that —

(a) not less than ten percent of its members' deposits are kept in a liquidity reserve fund; and

(b) its statutory reserves, retained earnings and equity shares are at no stage, less than ten percent of its total assets, except during the phase in period as permitted by the regulations.

(5) Where an Apex Body has not been established or is not functioning as such, the liquidity, stabilization and development funds shall be administered by a person or body of persons as determined by the Director of Societies, after consultation with the respective societies.

82. (1) A society may establish a contributory pension fund for its employees and may contribute to such pension fund.

(2) A pension fund established under subsection (1) shall not be considered part of the assets of the society but may be invested in such manner as may be prescribed by the bye-laws.

83. After making provision for doubtful loans and the prescribed payments to its statutory reserve and the stabilization and development funds, a society may contribute to any public cause, co-operative or charitable purpose.

84. (1) Subject to this section and section 81, any surplus may be distributed by way of dividend, bonus, or patronage refund amongst its members in proportion to their shares and their patronage with the society at such rate as may be prescribed.

(2) A registered society shall not —

(a) pay dividend on shares or bonus or distribute any part of its accumulated funds before the financial statements have been certified by an auditor approved or appointed by the Director of Societies;

(b) pay a dividend or make any payment on account or out of profits unless the retained earnings are positive and equity is not less than ten percent of assets.

(3) A bonus based on wages or on the value of the products of a member or a patronage refund calculated in proportion to the amount of the business done by each member with the registered society may be distributed periodically to the members from surplus funds after the deduction of all expenditure and after making provision for bad and doubtful debts and making allocation for the statutory reserve, stabilization and development fund and dividends.

PART VI - AUDIT, INQUIRY AND INSPECTION

85. (1) The board of every society shall, at its own expense, cause the accounts of the society to be audited at the end of each financial year by an auditor approved by the Director of Societies or appointed by him under subsection (2) for that purpose.

(2) Upon the expiration of the period of three months after the end of the financial year, if the board has failed to effect an audit, the Director of Societies shall cause an audit to be carried out by an auditor appointed by him under subsection (3).

(3) Without prejudice to anything contained in subsections (1) and (2), the Director of Societies —

(a) shall appoint a panel of auditors from which auditors may be selected by the co-operative for the purposes of an audit under subsection (1); and

(b) may direct that the cost of the audit be defrayed by the society.

(4) An auditor appointed under subsection (3)(a) must be a member of the Bahamas Institute of Chartered Accountants, in good standing and must be in possession of a valid practicing certificate.

(5) The board of a society shall not cause the accounts of a society to be audited by the same auditor for a period exceeding six consecutive financial years.

(6) The audit shall include an examination of overdue debts, if any, the verification of cash balances and securities, and a valuation of the assets and liabilities of the society and any other examination consistent with international accounting standards.

86. (1) At least one month prior to its annual general meeting, a society shall submit to the Director of Societies a copy of the audited financial statements and a copy of its annual returns for the previous year.

(2) No later than one month after its reporting period, a society shall submit to the Director of Societies a monthly return.

(3) The Director of Societies may, by notice in writing, require a society, director or officer of a society to make a special return on any subject connected with the business and affairs of the society and, when he requires a special return, he shall specify in the notice a time within which the special return is to be made.

(4) Any society that contravenes this section is liable to pay to the Director of Societies a special filing fee of five hundred dollars.

(5) The auditors appointed to carry out an audit shall have free access to the books, accounts, and vouchers of the society.

(6) The members of the board and the officers of the society shall furnish the auditors with all such information regarding the transactions and operations of the society as may be required.

(7) The Director of Societies and the auditors conducting an audit for the purposes of subsection (1) shall have power at the time of the audit —

(a) to summon any officer, agent, servant or member of a society or any other person, whom they have reason to believe can give valuable information regarding any transactions of the society or the management of its affairs; or

(b) to require any officer, agent, or member of the society or any other person to produce any book or document relating to any cash or securities belonging to the society.

(8) An audit —

(a) commissioned by the board of a society shall be completed within four months after the end of the financial year, and the audit report shall be submitted to the Director of Societies immediately by the board;

(b) commissioned by the Director of Societies shall be completed within three months after the receipt of the written commission from the Director of Societies, and the audit report and written comments and suggestions thereon, if any, shall be submitted to the Director of Societies who shall immediately transmit the same to the board of the relevant society.

(9) Upon receipt of an audit report and comments and suggestions thereon the board shall cause the same to be brought to the attention of the members of the society in an appropriate manner.

(10) The Director of Societies may, in the exercise of his function of supervision of societies —

(a) on his motion;

(b) on the application of a creditor of a society;

(c) in accordance with regulations made in that behalf, on the requisition of a society in respect of one of its members being itself a society;

(d) on the application of a majority of members of the board or one third of the members of a society present and voting; or

(e) on the recommendation of the apex organization, hold an inquiry or cause an inquiry to be made, into the constitution, operations and financial position of any society and in the course of such inquiry may inspect the books, accounts and other records of the society and all officers and members of the society whether past or present shall furnish such information in regard to the affairs of the society and produce all cash in hand and such books, accounts, papers and securities of the society as the Director of Societies or other person conducting the inquiry may require.

(11) At the conclusion of an inquiry, if the Director of Societies is satisfied that the board has mismanaged the affairs of the society or otherwise performed its duties improperly, he may by notice to the society direct it to remedy the situation within six months from the date of such notice.

87. (1) The Director of Societies may apportion the cost of an inquiry, or any part thereof, between the society and the person requesting the inquiry, but no such apportionment may be made unless the parties liable to pay the cost of such inquiry are given an opportunity to be heard.

(2) Costs that are required to be paid by virtue of subsection (1) may be recovered from the persons liable to make such payment on the application of the Director of Societies to a Magistrate of the district in which the person resides or carries on business.

(3) Upon receipt of an application under subsection (2), the Magistrate may, if he is satisfied as to the matters stated in the application, issue a warrant of distress and order the sale of any personal property belonging to such party, but no such sale may be ordered until the expiration of five days from the date of the issue of the warrant.

88. (1) The Director of Societies —

(a) may on his own motion; and

(b) shall on the application of a creditor of a society, inspect or direct a person authorised by him and working in his behalf to inspect the books of the society if in the case of an application under paragraph (b) the applicant —

(i) proves that an ascertained sum of money which is then due to him has been demanded from the society, and he has not received satisfaction within a reasonable time; and

(ii) deposits with the Director of Societies such sum as security for the cost of the proposed inspection as the Director of Societies may require.

(2) The Director of Societies shall communicate the results of any such inspection to the creditor and to the society into whose affairs the inquiry has been made.

89. (1) The Director of Societies may —

(a) on his own motion; or
(b) on the application of the lesser of twenty-five members or ten percent of the members, appoint a person as examiner who shall make an examination of the books of the society and examine the affairs of the society and shall make available his report to the Director of Societies.

(2) Subject to subsection (3), the Director of Societies may direct that the expenses incidental to an examination undertaken pursuant to this section are to be defrayed —

(a) by the members applying for the examination;

(b) by the society or its officers; or

(c) by any combination of the members, the society or its officers.

(3) When an examination undertaken pursuant to this section reveals substantial irregularities in the business of the society, the Director of Societies shall not direct any members on whose motion the examination was commenced to defray the expenses.

(4) Where the Director of Societies appoints an examiner pursuant to subsection (1), the society and its officers, members, agents or employees shall furnish the examiner with any books, accounts, securities or other documents the examiner requires to perform the examination.

90. (1) A member, or any interested person may apply ex parte, or on any notice that the Director of Societies may require, for an order directing any investigation to be made of the society and any of its member societies or corporations.

(2) On application pursuant to subsection (1), the Director of Societies may order an investigation of a society or of any of its affiliates where it appears to the Director of Societies that —

(a) the society is not fulfilling the purpose stated in its bye-laws;

(b) the society is not carrying on business in accordance with this Act, the regulations or the bye-laws;

(c) the society is not organized or being operated on co-operative principles;

(d) the business of the society or any of its member societies is or has been carried on with intent to defraud any person;

(e) the business or affairs of the society or any of its member societies have been carried on or conducted, or the powers of the directors have been exercised, in a manner that is oppressive or unfairly prejudicial to or that unfairly disregards the interests of a member or security holder;

(f) the society or any of its member societies was formed for a fraudulent or unlawful purpose or is to be dissolved for a fraudulent or unlawful purpose;

(g) persons concerned with the formation, business or affairs of the society or any of its member societies have acted fraudulently or dishonestly with the society; or

(h) the society is operating in a fashion that, in the Director of Societies judgment threatens its solvency.

(3) An applicant for an order pursuant to this section is not required to give security for costs.

(4) An ex parte application pursuant to this section shall be heard in camera.

(5) No person shall publish anything relating to ex parte proceedings conducted pursuant to this section other than with the authorisation of the Director of Societies or the written consent of the society being investigated.

91. (1) Where the Director of Societies is of the opinion after an inquiry or inspection under section 89 or 90, respectively that the board of any registered society is not performing its duties properly, he may, after objections, if any and after considering such objections at a general meeting of the society summoned by him, by order in writing —

(a) cause a new board to be elected;

(b) direct that the affairs of the society shall be managed and administered by a suitable individual or organization; or

(c) dissolve the board.

(2) Subject to subsection (3), every direction under paragraph (b) of subsection (1) shall have effect for such period not exceeding one year as may be specified in the order containing such direction.

(3) The Director of Societies may in his discretion from time to time amend the order for the purpose of extending the period during which the direction shall have effect.

(4) Where any order is made under subsection (1), the Director of Societies shall by the same or subsequent order appoint a fit and proper person or two or more such individuals or organization to manage and administer the affairs of the society, and may from time to time remove or replace any such appointee.

(5) Subject to the general direction and control of the Director of Societies, any appointee under this section to manage the affairs of a registered society —

(a) shall have the power to recover the assets and discharge the liabilities of the society and take such other steps as may be necessary in its interest; and

(b) may exercise all the powers, rights and privileges of a duly constituted committee of the society.

(6) Appointees under this section to manage the affairs of a registered society shall be jointly and severally responsible for any loss sustained through any such acts committed by them as are contrary to any enactment or the bye-laws of the society.

(7) The Director of Societies may fix the remuneration payable to any appointee by him under this section to manage the affairs of a registered society, and the amount of such remuneration and other expenses, if any, incurred in the management of the society shall be payable from the funds of the registered society.

(8) It shall be the duty of the appointee under this section to arrange for the election of a new board in accordance with the bye-laws of the society prior to the date upon which his appointment shall expire.

(9) No order under subsection (1) shall be made by the Director of Societies in respect of any registered society, if the society is indebted to any bank, financial institution, or creditor except after prior consultation with these institutions in regard to the dissolution of the board and to the persons by whom and the manner in which the affairs of the society are to be managed and administered.

(10) Nothing in this section shall be deemed to affect the power of the Director of Societies to cancel or suspend the registration of the society under section 15.

PART VII - DISPUTES

92. (1) Where any dispute that relates to the business of a society arises –

(a) among members, past members and persons claiming through members, past members and deceased members;

(b) between a member, past member, or claiming through a member, and the society, its board or any officer of the society;

(c) between a member and the society arising out of or under any bye-law relating to the disposal of the produce of agricultural or animal husbandry, or under any contract made under section 41;

(d) between the society and any other society;

(e) between the society or its board and any officer or employee of the society, the dispute shall be referred to the Director of Societies for a decision.

(2) The Director of Societies may before proceeding to hear or determine a dispute, make or cause to be made a preliminary investigation with the object of ascertaining the causes, defining the issues and endeavouring to bring about a voluntary settlement between the parties to the dispute.

(3) Where a dispute is referred to the Director of Societies under subsection (1) he may –

(a) decide the dispute himself; or

(b) refer the dispute to an arbitrator or arbitrators appointed by him.

(4) For the purpose of hearing any dispute, the Director of Societies or arbitrator, as the case may be, may administer oaths and may require the attendance of all parties concerned and witnesses, and the production of all books, documents and things relating to the dispute.

(5) The Director of Societies or the arbitrator, as the case may be, shall also have the power to order the expenses of determining any dispute including fees to legal practitioners to be paid either out of the funds of the society or by such parties as he determines.

(6) A party aggrieved by a decision of the Director of Societies or an arbitrator may appeal to the Registered Societies Appeal Tribunal within such time and in such manner as may be prescribed.

(7) Where there is no appeal under subsection (6), the decision of the Director of Societies and an award of an arbitrator may be filed in the Supreme Court or in the Magistrate's Court for the district and shall be registered in the court in which it is filed after the expiration of fourteen days after it is filed and registered, it shall be deemed to have the same force and effect as a judgement of the court in which it is registered and shall be enforced accordingly by the person who filed the decision or award.

(8) For the purposes of this section, the Chairman or other officer of the Apex Body may serve as an arbitrator.

(9) Notwithstanding anything in this section, a society may exercise any rights arising under any charges, mortgages, bills of sale or other securities duly executed in accordance with this Act or any other law without recourse to the Director or to arbitration.

(10) For the purposes of subsection (1), a claim by a society for a debt or demand due to it from a member, former member or a personal representative of a deceased member is a dispute that relates to the business of a society within the meaning of subsection (1).

93. (1) There shall be a Registered Societies Appeal Tribunal which shall consist of three persons, one of whom shall be an attorney-at-law of at least ten years standing.

- (2) The persons who shall constitute the Tribunal shall be appointed by the Minister for a period of not less than three years.
- (3) The Tribunal shall have jurisdiction to hear appeals from a decision of the Director of Societies or an arbitrator.
- (4) The decision of the Tribunal on a question of fact shall be final and may not be called into question in any court and shall be enforced in the same manner as if the decision had been a judgement of a civil court; but a decision of the Tribunal on a question of law may be appealed to the Supreme Court.
- (5) The Minister may by order prescribe the procedure of the Tribunal.
- (6) The members of the Tribunal shall receive such remuneration as the Minister determines, being not less than five hundred dollars per case.

94. (1) Notwithstanding anything contained in sections 92 and 93, the Director of Societies or an arbitrator may in the course of or making a determination in a dispute refer a question of law arising therefrom to the Supreme Court, by way of case stated for the opinion of that court.

(2) A Judge of the Supreme Court may consider and determine any question of law so referred.

PART VIII - RECONSTRUCTION OF SOCIETIES

95. (1) Reconstruction of a society may be effected by any of the following methods —

- (a) by the amalgamation with another society to form a single society;
- (b) by the transfer of the assets and liabilities of one society to another society; or
- (c) by the division of a society into two or more societies.

(2) Sections 96 and 97 shall have effect with respect to the procedure that must be followed in relation to paragraph (a) to (c) of subsection (1).

96. (1) A company registered under the Companies Act or registered under the Friendly Societies Act may by special resolution determine to convert itself into a registered society.

(2) Any such resolution for conversion into a registered society shall appoint ten persons, members of a company or friendly society as the case may be, who together with the Secretary, shall sign the rules and who may, by the resolution, be given powers to act on behalf of the company or friendly society as may be specified in such resolution.

97. A conversion under section 96 shall be deemed to be effective when the Director of Societies has issued a certificate of registration under this Act, and thereupon the registration of the company, industrial or provident society as such shall become void, and shall be cancelled by the proper officer, but the registration of any such body as a registered society shall not affect any right or claim for the time being subsisting against such body or any penalty incurred, and any such right or claim or penalty may be enforced against such body by proceedings taken in the same manner as if it had not become a registered society, and every such right or claim, and the liability for every such penalty shall have priority as against the property of such registered society over all other rights or claims against, or liabilities of, the registered society.

98. (1) Any two or more societies may, with the approval of the Director of Societies, by a resolution passed by not less than three fourths of all the members of each society present and voting at a special meeting called for the purpose, amalgamate as one society.

(2) Where the resolution referred to in subsection (1) is passed, each society shall apply to the Director of Societies for cancellation of its registration and the societies shall jointly make application for the registration of the amalgamated society.

(3) The registration of an amalgamated society shall be deemed to be sufficient to vest the assets and liabilities of the amalgamating societies in the amalgamated society.

99. (1) A society may, with the approval of the Director of Societies, by resolution passed by not less than three-fourths of all the members present and voting at a special general meeting called for that purpose, agree to transfer its assets and liabilities to any other society which has agreed to accept them.

(2) An acceptance by another society under subsection (1) shall be evidenced by a resolution of not less than three-fourths of the members of that other society present and voting at a special general meeting called for that purpose.

(3) On the passing of a resolution referred to in subsections (1) and (2), the transferring society shall apply to the Director of Societies for cancellation of its registration and the transferee society shall submit to the Director of Societies a copy of its resolution agreeing to the transfer.

(4) A cancellation of registration and a submission of a resolution agreeing to accept a transfer shall be deemed to be sufficient to vest the assets and liabilities of the transferor in the transferee.

100. Notwithstanding sections 98 and 99, no amalgamation or transfer shall be effected —
(a) unless the creditors of the societies concerned are given three months written notice of the proposals; and
(b) where any creditor objects in writing to the proposal, any claims against the society are first satisfied.

101. (1) Any society may, with the approval of the Director of Societies, by resolution passed by three-fourths of the members present and voting at a special general meeting called for the purpose, resolve to divide itself into two or more societies; but any such resolution (hereinafter in this section referred to as a “preliminary resolution”) shall contain proposals for the division of the society among new societies into which it is proposed to divide the society and may specify the area of operation of, and the members who will constitute each of the new societies.

(2) A copy of the preliminary resolution shall be sent to all members and creditors of the society and a notice of the resolution shall also be given to all persons whose interests may be affected by the division of the society.

(3) Any member of a society may, notwithstanding any agreement to the contrary, by notice given to the society within a period of three months from his receipt of the preliminary resolution, indicate his intention not to demand the payment of monies due to him.

(4) Any creditor of the society may, notwithstanding any agreement to the contrary, by notice given to the society within a period of three months from his receipt of the preliminary resolution, indicate his intention not to demand the payment of monies due to him.

(5) Any other person whose interest may be affected by the division of a society may by notice given to the society object to the division unless his claim is satisfied.

(6) After the expiration of three months from the receipt of the preliminary resolution by all the members and creditors of the society and of the notice to other persons given under subsection (2), another special general meeting of the society of which at least fourteen clear days notice shall be given to its members, shall be convened for the consideration of the preliminary resolution.

(7) If at the special general meeting referred to in subsection (6), the preliminary resolution is confirmed by a resolution passed by not less than two thirds of the members present and voting either without changes or with such changes as in the opinion of the Director of Societies are not material, the Director of Societies may subject to subsection (9) and section 10, register the new societies; and upon such registration, the original society shall be deemed to be dissolved and its registration cancelled.

(8) The decision as to whether or not any changes made in the preliminary resolution are material shall rest with the Director of Societies.

(9) At the special general meeting referred to in subsections (6) and (7), provision shall be made by another resolution for —

(a) repayment of the share capital of all the members who have given notice under subsection (3);

(b) satisfaction of the claims of all the creditors who have given notice under subsection (4);

(c) satisfaction of the claims of such of the other persons who have given notice under subsection

(5) as the Director of Societies decides, or securing their claims in such manner as the Director of Societies directs, but no member or creditor or other person shall be entitled to such repayment or satisfaction until the preliminary resolution is confirmed as provided in subsection (7).

102. The registration of new societies established pursuant to section 101 shall be deemed to be sufficient to vest the assets and liabilities of the original society, in the manner specified in the preliminary resolution as confirmed in accordance with subsections (6) and (7) of that section.

PART IX - WINDING UP AND ANCILLARY MATTERS

103. (1) Where the Director of Societies, after an inquiry has been held under Part VI, is of the opinion that the society ought to be wound up, he may make an order directing it to be wound up and may appoint a liquidator for that purpose and fix his remuneration, which shall be paid out of the funds of the society.

(2) Where no liquidator is appointed under subsection (1), the assets and liabilities of the society shall vest in the Director of Societies.

104. Where it is a condition of the registration of a society that it shall consist of at least ten members who are above the age of fifteen years, the Director of Societies may by order in writing direct the society to be wound up if at any time it is proved to his satisfaction that the membership has been reduced to less than that number.

105. (1) Subject to the approval of the Director of Societies, the members of a society may, by resolution supported by at least two-thirds of all the members, authorise the winding up of that society.

(2) The board shall cause a notice of a general meeting of the members to be sent to each member for the purpose of authorising the winding-up.

(3) The members of a society may, at the meeting to be held for the purpose of authorising the winding-up, appoint a liquidator.

(4) Where the Director of Societies —

(a) receives notice, in a form satisfactory to him, or an authorisation to wind-up a society;

(b) is satisfied that it is in the best interest of the society and its members, he may approve the winding-up.

(5) An authorization approved pursuant to subsection (4) shall specify —

(a) the assets and liabilities of the society;

(b) the claim of any creditors;

(c) the number of members of the society; and

(d) the nature and extent of the members' interests in the society.

(6) Where a society is wound-up under this section, any surplus assets remaining after all claimants have been paid shall be utilised in the manner specified in section

110.

106. (1) When pursuant to section 15, the Director of Societies cancels the registration of a society, the assets and liabilities of the society shall immediately vest in him and he shall have in respect of those assets and liabilities the powers of a liquidator under section 107.

(2) The Director of Societies may by notice published in the Gazette delegate his power as a liquidator to a suitably qualified person; but any such delegation shall be revocable at will and shall not preclude the Director of Societies from exercising his power.

107. A liquidator appointed under section 103 shall have power to do any one or all of the following things —

(a) to take immediate possession of all assets belonging to the society and of all books, records and other documents relating to the business of the society so far as may be necessary for its winding-up and to raise on the security of the assets of the society the money requisite for this purpose;

(b) to have disputes referred to the Director of Societies with recommendation that the dispute be settled by arbitration under section 92 and to institute and defend actions and other legal proceedings on behalf of the society in the name of his office;

(c) to investigate all claims against the society and, subject to the provisions of this Act, to decide questions of priority arising out of such claims, and to pay rateably according to the amount of such debts, the surplus if any being applied in payment of interest from the date of liquidation at a rate to be fixed by the Director of Societies and not exceeding five per cent;

(d) to fix the time within which creditors shall have to prove their debts and claims or be included for the benefit of any distribution made before those debts or claims are proved;

(e) to make any compromise or arrangement with creditors having and alleging to have any claims, present or future, for which the society may be rendered liable;

(f) to compromise all claims or liabilities to calls and debts and liabilities capable of resulting in debts and all claims, present and future certain or contingent, subsisting or supposed to subsist between the society and a contributory or alleged contributory or other debtor or person apprehending liability to the society and all

questions in any way relating to or affecting the assets or winding up of the society on such terms as may be agreed and take any security for the Powers of discharge of any such call, liability, debt or claim and give complete discharge in respect thereof;

(g) from time to time to determine the contribution to be made or remaining to be made by the members or past members or by the estates or nominees or legal personal representatives of deceased members or by any officer to the assets of the society, such contribution shall include debts due from members or persons;

(h) to determine by what persons and in what proportions the cost of liquidation shall be borne;

(i) to arrange for the distribution of the assets of the society in a convenient manner when a scheme of distribution has been approved by the Director of Societies;

(j) to call such general meetings of the society as may be necessary;
(k) to administer oaths, require the attendance of witnesses and other persons concerned with the management of the society and to require such persons to produce books, documents and other like matters relevant to the society.

108. A liquidator shall exercise his powers subject to the powers of the Director of Societies and the Director of Societies may —

- (a) rescind or vary an order made by a liquidator and make whatever new order he deems appropriate;
- (b) remove the liquidator from office;
- (c) call for all books, documents and assets of the society;
- (d) by order in writing limit the powers of the liquidator under section 107;
- (e) require accounts to be rendered to him by the liquidator;
- (f) procure the auditing of the accounts of the liquidator and authorise the distribution of the assets of the society;
- (g) make an order for the remuneration of the liquidator; and
- (h) refer any subject to dispute between a liquidator and any third party to arbitration if that party consents in writing to be bound by the decision of the arbitrator.

109. When the affairs of a society have been wound up, or after the Director of Societies makes an order cancelling the registration of the society, the society shall be deemed to be dissolved from the date of such order.

110. After all the liabilities including the paid-up share capital of a cancelled society have been met, any surplus assets shall not be divided amongst its members but shall be devoted to any object contained in the bye-laws of the society and when no object is so contained, to any object of public utility determined by the general meeting of the society and approved by the Director of Societies, or such assets, as the members, so agree, may be assigned by the Director of Societies in whole or in part to either or both of the following —

- (a) an object of public utility of local interest;
- (b) a charitable purpose, or may be placed on deposit with a bank or other financial institution approved by the Director of Societies until such time as a society with similar objects and bye-laws is registered when with the consent of the Director of Societies such surplus assets may be credited to the reserve fund of such new society.

111. (1) Where in the course of audits, inquiries or inspections as in Part VI or an audit under section 85, or a liquidation of a registered society, it appears that any sum of money is due to the society from any person who or which has taken part in the organization or management of the society, the Director of Societies may, of his own motion or upon the application of the board or liquidator or any creditor or contributor to the society, as the case may be, examine the conduct of such person or group of persons and make an order requiring him or such group to —

- (a) repay with such interest as the Director of Societies thinks fit such money or part thereof;
- (b) restore such property or part thereof; or
- (c) contribute such sum as the Director of Societies thinks fit to the assets of the society by way of compensation.

(2) Before making an order under subsection (1) against any person or group of persons, the Director of Societies shall give that person or group of persons an opportunity to be heard and to show cause why such order should not be made.

(3) Where an order under subsection (1) has not been complied with, such sum may be recovered by the society on application to the Magistrate having jurisdiction in the registered place of business of the society, as though it were a fine imposed by sentence of a Magistrate, and in default of payment, the Magistrate, may impose a sentence of imprisonment of such person or group of persons, for a term not exceeding six months or until due payment is made or whichever is earlier.

(4) Neither the preceding provisions of this section nor the making of any order thereunder may be deemed or construed to preclude or otherwise affect the institution or maintenance of a prosecution against any person or group of persons referred to in subsection (1) in respect of any offences under any other written law.

112. Where the Director of Societies is satisfied that any person with the intent to defraud or delay the execution of any order that may be made under Part VI or any decision that may be given in a dispute referred to the Director of Societies or to any arbitrator is about to dispose of the whole or any part of his property, the Director of Societies may, unless adequate security is furnished, apply to the Magistrate of the district in which the property

is situated for an order for the conditional attachment of such property and the Magistrate may, if he considers it to be in the interest of justice, make such an order.

113. An order made by a liquidator or the Director of Societies under this part shall be enforced in all respects as an order made by a Magistrate in his civil jurisdiction.

114. Except to the extent provided in this Part, no civil court shall have any jurisdiction, in respect of any matter concerned with the winding-up of a society under this Act.

PART X - APEX BODY

115. There shall be an Apex Body which shall be called the National League and which shall be composed of Attachment of such member representatives of all societies which exist in The Bahamas.

116. (1) The Apex Body shall be a registered society and shall co-ordinate, assist and promote all registered societies and shall perform such functions as may be determined by its constituent members.

(2) Without prejudice to subsection (1), the Apex Body shall have responsibility for the administration and management of the stabilization fund, the liquidity fund, and the development fund, as established by section 81.

(3) The Apex Body shall —

(a) pay credit union market rates of return on reserves; and

(b) invest in government securities or other government guaranteed investments or other investments approved by the Director of Societies.

117. The directors of the Apex Body shall be elected at the first meeting of that body and shall hold office for a period of one, two or three years in accordance with the bye-laws of the Apex Body.

118. The Director of Societies may, from time to time, consult with and delegate to the Apex body, matters relating to the development of registered societies.

PART XI - CREDIT UNIONS

119. In this part —

(a) “credit union” means a registered society carrying on the business of a credit union;

(b) “liquid assets” means assets maintained by a credit union to ensure that it can meet its commitments with respect to loans, withdrawals of deposits, and payment of accounts to fund its operation.

120. This part applies to every registered society that is organised and operated as a credit union.

121. (1) No credit union shall carry on any business that is contrary to this Act, the regulations or its bye-laws.

(2) A credit union may, with permission of the Director of Societies, do all other acts and things as are incidental or conducive to or consequential to the attainment of its objectives.

122. (1) Every credit union shall make an allowance for doubtful loans in accordance with the requirements set out in the regulations.

(2) The directors of a credit union shall establish and maintain equity at a minimum of 10%, of total assets before any dividend is paid out.

(3) Subsection (3) of section 146 applies *mutatis mutandis* to this section.

123. (1) Subject to this Act and the regulations, every loan must be approved in accordance with the policies established by the directors before any funds are advanced.

(2) A loan to a director, a credit committee member, a supervisory committee member, or any other committee member or an employee of a credit union or any person connected with one of them must be approved in the manner prescribed in the regulations.

(3) Any person who knowingly approves or grants a loan in contravention of this Act or regulations shall be held liable for any losses resulting to the credit union in connection with that loan.

124. Subject to any restrictions that may be prescribed in the regulations, the credit union may take any security for loans that it considers advisable in keeping with sound business practices.

125. (1) Loans may be made only to members.

(2) The bye-laws shall provide for limits on the amounts of loans to any one member or on any type of loans.

126. (1) Where a credit union is reporting loans on the balance sheet in its annual financial statements, it shall report the loans at their net estimated value after deducting the allowance for doubtful loans.

(2) Any advance given by way of overdraft or line of credit is deemed to be a loan for the purpose of the balance sheet and must be reported as a loan.

127. (1) The maximum intervals at which interest on loans must be paid may be prescribed in the regulations.

(2) Where the borrower has not paid the interest on his loan for a period determined in the regulations, the credit union shall not include that interest in income.

128. (1) Subject to section 78, a credit union may, without the authority, aid, assistance or intervention of any other person or official —

(a) receive deposits from any person, whatever his age, status or condition in life whether or not that person is qualified by law to enter into ordinary contracts; and

(b) pay any or all of the deposit and any or all of the interest on the deposit to or to the order of that person unless, before payment, the money so deposited is claimed by some other person —

(i) in any action or proceeding to which the credit union is a party and in respect of which service of a writ or other process originating such action or processing has been made on the credit union; or

(ii) in any other action or proceeding pursuant to which an injunction or order made by the court requiring the credit union not to make payment of the money or to make payment of it to a person other than the depositor has been served on the credit union, and in that case the money so deposited may be paid to the depositor with the consent of the claimant or to the claimant with the consent of the depositor.

129. (1) A credit union is not bound to see to the execution of any trust, whether express, implied or constructive, pursuant to which any deposit or share is subject.

(2) Where any deposit or share is subject to a trust of which the credit union has notice, the receipt or order —

(a) of the trustee in whose name the deposit or share stands; or

(b) if the deposit or share stands in the names of two or more trustees, all those trustees or any of them who, pursuant to the document creating the trust, may be entitled to receive the deposit or share, is, notwithstanding any trust to which the deposit or share is subject, a sufficient discharge for the payment of any money payable in respect of the deposit or share, and the credit union is not bound to see to the application of any money paid on the receipt or order.

(3) Notwithstanding any neglect or omission on the part of a credit union to enter a proper description in its books, no executor, administrator, guardian, committee or trustee who is entered on the books of the credit union as a member, or who is described as representing a named estate, trust or trust beneficiary in any such capacity, is personally liable to the credit union with respect to the share that he represents.

(4) The estate, trust or trust beneficiary represented by a person described in subsection (3) continues to be liable to the credit union in the same manner and to the same extent as if the testator, minor, ward, person of unsound mind, beneficial trust or other trust beneficiary were entered on the records of the credit union as the holder of the shares.

130. (1) Every credit union shall have a credit committee which shall consist of no less than three members and no more than five members, who shall be determined in accordance with the procedure specified by section 17.

(2) The elected members of a credit committee may hold office for such term as the bye-laws provide or until their successors are elected.

(3) The credit committee shall consist of the number of members fixed by the bye-laws, which shall be not fewer than three.

(4) No person who is a member of the Supervisory Committee of the credit union shall be a member of the credit committee.

(5) No member shall be a member of the credit committee unless he has attained the age of eighteen years.

(6) A majority of the credit committee constitutes a quorum.

(7) A member entitled to vote at an election of members of the credit committee, if he votes shall cast thereat a number of votes equal to, or less than, the number of members of the credit committee to be elected, and the member shall distribute the vote among the candidates in such a manner as he sees fit, but no candidate shall receive more than one vote from each member.

(8) Where a vacancy occurs in the credit committee, the board of directors may fill the vacancy until the next annual meeting of the credit union.

(9) The bye-laws of the credit union may provide for election and retirement of members of the credit committee in rotation, but in that case no member of the credit committee shall be elected for a term of more than three years.

131. The credit committee shall perform such duties as are prescribed by this Act, the regulations and the byelaws of the credit union.

132. When a member of the credit committee fails to attend three consecutive meetings without, in the opinion of the board, having a reasonable cause therefor or fails to perform any of the duties allotted to him as a member of the committee, his position on the committee may be declared vacant by the board who may then appoint a qualified person to fill the vacancy until the next annual meeting of the credit union.

133. (1) The board may, upon such terms and conditions as it specifies, authorise the credit committee to approve loans to members.

(2) The credit committee may, upon such terms and conditions as the board specifies, authorise the manager or other employee of the credit union to approve loans to members within a stated range.

(3) Any person authorised by the board to approve loans under subsection (1) or (2) shall submit a written monthly report to the credit committee stating the number of loan applications received, the number of loans granted and the security, if any, obtained for such loans.

(4) The responsibilities and duties of any person authorised to approve loans under subsection (2) are concurrent with the responsibilities and duties of the credit committee.

134. (1) The credit committee shall —

(a) meet at least once every month;

(b) keep minutes of its meetings;

(c) submit a report to the board of directors stating —

(i) the number of loan applications received;

(ii) the number and category of loans granted;

(iii) the security obtained for such loans; and

(iv) applications denied and delinquent loans; and

(d) submit an annual report on the matters referred to in paragraph (c) to the annual meeting of the credit union.

(2) The members of a society may, by special resolution in a special meeting called for the purpose, remove a credit committee which fails to comply with paragraph (c) of subsection (1).

135. (1) The members may, by resolution passed by two-thirds of the votes cast at a special general meeting called for that purpose, remove a member of the credit committee before the expiration of his term of office, and shall at that meeting elect another member in place of the first mentioned member for the unexpired portion of his term.

(2) The notice calling the meeting of members referred to in subsection (1) shall specifically state that the purpose of the meeting is to remove the member of the credit committee who is named in the notice.

(3) The member of the credit committee, removed under this section, has the right to make such representations to the members regarding the resolution for his removal as he thinks fit, and may be represented by an attorney-at-law or an agent.

136. (1) Every credit union shall have a supervisory committee which shall be elected by its members at the annual general meeting.

(2) The members of a supervisory committee shall hold office for such terms as the bye-laws provide and until their successors are elected.

(3) The supervisory committee shall consist of the number fixed by the bye-laws, which shall be not fewer than three.

(4) No person who is a member of the board of directors or credit committee or who is an employee of the credit union shall be a member of the supervisory committee.

(5) No member shall be a member of the supervisory committee unless he has attained the age of eighteen years.

(6) A majority of the supervisory committee constitutes a quorum.

(7) A member entitled to vote at an election of members of the supervisory committee, if he votes, shall cast thereat a number of votes equal to or less than the number of members of the supervisory committee to be elected, and the member shall distribute the votes among the candidates in such manner as he sees fit, but no candidates shall receive more than one vote from each member.

(8) Where a vacancy occurs in the supervisory committee, the supervisory committee may fill all vacancies until the next annual meeting of the credit union.

(9) The bye-laws of the credit union may provide for the election and retirement of members of the supervisory committee in rotation, but in that case no member shall be elected for a term of more than three years.

137. The supervisory committee shall examine the books of the credit union, confirm the cash instruments, property and securities of the credit union and confirm the deposits of the members and perform such other duties as are prescribed by this Act, the regulations and the bye-laws of the credit union.

138. When a member of the supervisory committee fails to attend three consecutive meetings of the committee without in the opinion of the supervisory committee, having a reasonable cause therefor, or fails to perform any of the duties allotted to him as a member of the committee, his position on the committee may be declared vacant by the remaining members of the committee who may appoint a qualified person to fill the vacancy until the next annual meeting of the credit union.

139. The board of directors may appoint such persons as it considers necessary to assist the supervisory committee in its duties, and may pay those persons such remuneration as it thinks fit.

140. (1) When the supervisory committee has reasonable cause to believe that the funds, securities or other property of the credit union have been misappropriated or misdirected, or in the event that the bye-laws of the credit union, this Act or the regulations have been contravened by the board of directors, the credit committee or a member thereof or an officer or employee engaged by the board of directors or, the supervisory committee shall forthwith inform the Director of Societies in writing.

(2) The supervisory committee shall appoint an auditor or some other body to assist it in determining whether any of the funds, securities or other property of the credit union have been misappropriated or misdirected and the remuneration of any auditor or other body so appointed shall be determined by the supervisory committee and paid by the credit union.

(3) In the event of a misappropriation or misdirection or a suspected misappropriation or suspected misdirection as referred to in subsection (1), the supervisory committee may suspend any member of the board of directors on approval of the Director of Societies in writing.

(4) The supervisory committee shall forthwith request the board to summon a special general meeting of the members to be held within fourteen days after the suspension referred to in subsection (3); and where the board fails to summon such a meeting the supervisory committee shall summon the meeting within seven days after the expiry of the period of fourteen days.

(5) The supervisory committee shall report to the general meeting all the circumstances of any misappropriation or misdirection of funds, securities or other property and the reasons for any suspension.

(6) The members of the credit union may, by resolution, dismiss from office any person suspended under subsection (3), and, when the members of the credit union do not dismiss from office any person so suspended, that person shall be reinstated forthwith.

141. (1) The supervisory committee shall meet at least every two months, and where no auditor has been appointed pursuant to section 85, shall meet every two months, and shall at each such meeting examine the affairs of the credit union.

(2) The supervisory committee shall keep minutes of its meetings and shall —

(a) within seven days of each meeting report the results thereof in writing to the board of directors; and

(b) submit a written report to the annual meeting of the members of the credit union.

142. (1) The members may, by resolution passed by two-thirds of the votes cast at a special general meeting duly called for the purpose, remove a member of the supervisory committee before the expiration of his term of office, and shall by vote cast at the meeting elect another member in his stead for the unexpired portion of his term.

(2) The notice calling the meeting of members referred to in subsection (1) shall state that the purpose of the meeting is to remove the member of the supervisory committee who is named in the notice.

(3) The member of the supervisory committee removed under this section has the right to make such representations to the members regarding the resolution for his removal as he thinks fit, and may be represented by an attorney-at-law or an agent.

PART XII – CONSUMERS’ SOCIETIES

143. In this Part, “consumers’ society” means a registered society whose primary purpose is to purchase, procure, process, manufacture, exchange, hire or deal in goods or services for sale at retail to its members who are to be the primary users or consumers of those goods and services.

144. This Part applies to every society that is organised or operated as a consumers’ society.

145. Subject to the prior approval of the Director of Societies, a society may provide in its bye-laws that no more than one-third of its directors may be employees.

146. (1) The directors of a consumers’ society shall set aside not less than twenty five percent of any surplus in a reserve before paying a dividend.

(2) When the amount of the reserves as required by subsection (1) equals or is more than twenty five percent of the total assets of the society as shown in its audited financial statement for the financial year, the directors need not set aside any part of the surplus in a reserve.

(3) The Director of Societies may exempt a consumers’ society from subsections (1) and (2) where he considers it appropriate to do so.

(4) A consumers’ society may charge against its reserve required by subsections (1) and (2) —

- (a) net losses resulting from its business operations; and
- (b) any losses resulting from revaluation or sale of its assets.

PART XIII - HOUSING SOCIETIES

147. In this Part —

(a) “housing society” means a registered society whose primary purpose is to provide housing units for occupancy by its members as nearly as possible at cost;

(b) “housing charges” means the fee charged by a housing society to its members to cover its costs of providing housing accommodation; and

(c) “housing unit” means housing accommodation intended for individual or family use.

148. This Part applies to every housing society.

149. The relationship between a housing society and its members is not a relationship between a landlord and his tenants.

150. Where the bye-laws of a society provide that it is a housing society or that this Part applies to the society, the society may not repeal or amend that provision of the byelaws without the consent of the Director of Societies.

151. The bye-laws of a housing society must, in addition to the matters required to be set out therein by section 11, include the following —

- (a) the manner in which each member may be required to furnish capital for the purposes of the society;
- (b) the manner in which a member may be required to pay for housing charges or other reserves;
- (c) the basis for fixing the amount of housing charges;
- (d) subject to section 29, the manner of withdrawal by a member and the repayment of the members’ interests in the society; and
- (e) the rules governing any leases of housing units by members to non-members.

152. Where a housing society has a share capital, that society shall not pay any dividend on the share capital to its members.

153. (1) The directors of a housing society shall set aside not less than twenty-five percent of any surplus in a reserve.

(2) When the amount required to be set aside pursuant to subsection (1) is equal to or is more than twenty-five percent of the total assets of the society as shown in the audited financial statement for the financial year, the directors need not set aside any part of the surplus in a reserve.

(3) A housing society may —

- (a) invest or deposit its reserve in any registered society approved by the Director of Societies;
- (b) deposit its reserve in any bank registered under the Bank and Trust Companies Regulation Act; or

- (c) invest its reserve in any other manner authorized by the Trustee Act.
- (4) A housing society shall use its reserve as required pursuant to subsection (1) to cover —
- (a) operating losses; or
 - (b) any contingencies that the directors consider are necessary to the operation of the society.
- (5) Any gains resulting from the sale of real property —
- (a) must be set aside as a reserve fund for unforeseen operating losses or other contingencies, or for the maintenance or further development of the services provided by the society; or
 - (b) must, where the matters authorise at an annual meeting, be donated by the directors to one or more organizations, associations or groups with objectives of a benevolent or charitable nature or housing society with similar objectives.

154. The Landlord and Tenant Act does not apply to the relationship between —

- (a) the housing society; and
- (b) its members and any person whose membership in the housing society has been terminated.

155. (1) Where a person's membership in a housing society is terminated, any right of that person to possess or to occupy residential premises acquired by virtue of membership in the society is terminated.

(2) Where a person's membership in a housing society is terminated and the member does not give up possession of the housing unit he occupies, the housing society may apply to the court to recover possession or to recover any arrears of housing charges.

156. (1) Where a member —

(a) has his membership terminated or has vacated or abandoned the housing unit formerly occupied by him; and

(b) has left property in the housing unit, the housing society may apply to the Magistrate's Court for the district where the housing unit is situated for an order authorising it to remove the property from the housing unit and sell or otherwise dispose of it.

(2) The Magistrate may make an order pursuant to subsection (1) where he is satisfied that the housing society has made a reasonable effort to locate the former member.

(3) Where a housing society sells or otherwise disposes of property pursuant to any order made under subsection (2), it shall pay into the Magistrate's Court, to the credit of the former member, any remaining proceeds of the disposition after deducting —

(a) any amount with respect to costs incurred by it relating to the disposition that it would be authorised to retain if the property were goods sold pursuant to distress for housing charges; and

(b) any arrears of housing charges and damages that the Magistrate allows.

(4) Where a former member does not claim the remaining proceeds described in subsection (3) within three months after the date the money was paid into the Magistrate's Court, the money shall be paid into the Stabilization Fund.

(5) Where a housing society removes, sells or otherwise disposes of property pursuant to an order made under subsection (2), the housing society is not liable to any action taken by the former member with respect to the removal, sale or disposition.

PART XIV - INDUSTRIAL SOCIETIES

157. In this Part, "industrial society" means a society whose primary purpose is to operate an enterprise in which its members are the workers necessary for the operation.

158. This Part applies to every registered society that is organised or operated as an industrial society.

159. (1) In an industrial society, seventy-five percent of all employees must be members of the society and seventy-five percent of the employees of a member society must be members of the member society.

(2) Subject to subsection (3), no industrial society shall sub-contract out more than fifty percent of its work.

(3) Where an industrial society applies to the Director of Societies, he may allow the industrial society to sub-contract out more than fifty percent of its work.

160. In addition to the matters required to be set out in the bye-laws pursuant to section 11, the bye-laws of an industrial society must include —

- (a) conditions of admission, expulsion or suspension of its members;

- (b) a procedure for laying off members when there is a lack of work and a procedure of recall to work;
- (c) remuneration of workers involved in the day-to-day work of the society; and
- (d) allocation of bonus among members.

161. No industrial society may be registered where the acquisition of goods for resale to the public is one of its principal objects stated in its bye-laws.

162. Notwithstanding section 84 when allocating among creditors or paying a bonus to the members of an industrial society, the directors may take into account the contribution of each member.

163. Notwithstanding any other provision of this Act, the majority of directors of an industrial society may be employees of the society.

PART XV - FORMER-ACT SOCIETIES

164. (1) Upon the commencement of this Act, all corporate instruments of a former-Act society and all cancellations, suspensions, proceedings, acts, registrations and things, lawfully done under any provision of the former Act are presumed to have been lawfully done under this Act, and continue in effect under this Act as though they had been lawfully done under this Act.

(2) For the purposes of this section “lawfully done” means to have been lawfully granted, issued, imposed, taken, done, commenced, filed or passed, as the circumstance require.

(3) For the purposes of this Part —

(a) “former Act” means the Co-operative Societies Act in force immediately before the commencement of, and repealed by this Act;

(b) “former-Act society” means a society registered pursuant to the former Act.

165. (1) Notwithstanding any other provisions of this Act, but subject to subsection (2), if any provision of a corporate instrument of a former-Act society lawfully in force immediately before the commencement of this Act is inconsistent with, repugnant to, or not in compliance with this Act, that provision is not illegal or invalid only by reason of that inconsistency, repugnancy or noncompliance.

(2) Any act, matter or proceeding or thing done or taken by the former Act society or any director, member or officer of the society under a provision mentioned in subsection (1) is not illegal or invalid by reason only of the inconsistency, repugnancy or non-compliance mentioned in that subsection, or by reason of being prohibited, or not authorised by the law as it is after commencement of this Act.

166. (1) Every former-Act society must, within one year after the commencement of this Act, apply to the Director of Societies for a certificate of continuance under this Act.

(2) A fee to defray administration costs may be prescribed in respect of an application and certificate of continuance under this Part.

167. Within the period referred to in section 166 (1), any amendments to, or replacement of, the bye-laws of a former-Act society must be made in accordance with this Act.

168. Bye-laws of continuance may, without so stating in the bye-laws, effect any amendments to the bye-laws of a former-Act society if the amendment is an amendment that a society registered under this Act can make in its byelaws.

169. (1) Upon receipt of an application under this Part, the Director of Societies may, and, if the applicant complies with all reasonable requirements of the Director of Societies to have the continued society accord with the requirements of this Act, the Director of Societies must, issue a certificate of continuance to the former-Act society, in accordance with section 166.

(2) On the date shown in the certificate of continuance —

(a) the former-Act society becomes a society to which this Act applies as if it had been registered under this Act;

(b) the bye-laws of continuance are the bye-laws of registration of the continued society; and

(c) except for the purposes of subsection (1) of section 164, the certificate of continuance is the certificate of registration of the continued society.

170. When a former-Act society is continued as a society under this Act —

(a) the property of the former-Act society continues to be the property of the society;

(b) the society continues to be liable for the obligations of the former-Act society;

- (c) an existing cause of action, claim or liability to prosecute is unaffected;
- (d) a civil, criminal or administrative action or proceeding pending by or against the former-Act society may be continued by or against the society; and
- (e) a conviction against, or ruling, order or judgement in favour of or against, the former-Act society may be enforced by or against the society.

171. When a former-Act society fails to apply to the Director of Societies for a certificate of continuance within the time limited therefor under section 166, then, after the expiration of that period —

- (a) the former-Act society may not, without leave, sue in any court, but may be made a defendant to a suit;
- (b) no bonus or dividend shall be paid to any member of the former-Act society; and
- (c) every director of the former-Act society is liable to a penalty of one hundred dollars a day for each day during which the former-Act society carries on its undertaking thereafter.

172. (1) A reference in any bye-law of any society to the former Act or any procedure under the former Act is, in relation to any former-Act society continued under this Act to be construed as a reference to the provision or procedure of this Act or procedure thereunder that is the equivalent provision or procedure under this Act.

(2) Without affecting the operation of the Interpretation and General Clauses Act, when there is no equivalent provision in this Act to the provision or procedure in or under the former Act referred to in the byelaws, the provision or procedure of the former Act is to be applied, and stands repealed to the extent necessary to give effect to that reference in the bye-laws.

PART XVI - OFFENCES

173. (1) Any member, director, committee member, agent or employee of a society who corruptly accepts, agrees to accept, obtains or attempts to obtain whether for himself or another, any gift or consideration as an inducement or reward for doing or forbearing to do any act relating to the business of the society or for showing favour or disfavour to any person in relation to the business of the society and any person who corruptly gives, agrees to give or offers such gift or consideration to any member, director, committee member, agent or employee of a society as such inducement or reward, commits an offence and is liable on summary conviction to a fine of two thousand dollars or to a term of imprisonment for five years.

(2) In this section, “consideration” includes valuable consideration of any kind.

174. (1) Any person who obtains possession of any property of or is granted any loan by a society by false representation or other corrupt means or wrongfully withholds or misapplies any such property or loan or willfully applies any part thereof to purposes other than those directed or expressed in the bye-laws of such society or authorised in this Act or the regulations, commits an offence and is liable on summary conviction to a fine of one thousands dollars.

(2) In any proceedings under this section the person accused may in addition to any penalty imposed be ordered to deliver up any property or repay any sum of money to which the proceedings relate and pay the cost of the proceedings.

175. (1) A society or any officer or member thereof or any other person who fails without reasonable cause or willfully, neglects or refuses to comply with any requirements of this Act or the regulations, any order given for the purposes of and in accordance with, the Act or to furnish any information or who purporting to comply with any such requirement knowingly furnishes false information commits an offence.

(2) Any person who willfully or without reasonable cause disobeys any summons, order or direction lawfully issued under this Act or the regulations commits an offence.

(3) Any officer or member of a society who willfully contravenes the bye-laws of the society relating to his duties or functions as such officer or member commits an offence.

(4) A person who commits an offence under this section is liable to a fine of two thousand dollars.

176. (1) Any person who fraudulently or clandestinely removes any property comprised in a charge created in favour of a society under section 42 from the place where such property was situated at the time of the execution of the charge or who knowingly disposes of or deals with or attempts to dispose of or deal with such property without first obtaining in writing leave of the society, commits an offence and is liable on summary conviction to a fine of one thousand dollars and to a term of imprisonment for one year.

(2) Where any person who has received a loan from a society is convicted of an offence under this section there may be imposed on him notwithstanding any penalty specified in

subsection (1) an additional penalty equal to such amount of the loan with interest as has not been repaid to the date of the conviction and the payment of such additional penalty shall discharge the liability of the borrower to repay the loan.

(3) Where the court has imposed an additional penalty specified in subsection (2) and that penalty is not paid, the court may order that the person convicted under this section and who has defaulted in the payment of the additional penalty be imprisoned for six months in respect of such default.

177. (1) A person commits an offence, who makes or assists in making a report, return, notice or other document, required in this Act or the regulations to be sent to the Director of Societies or to any other person, that —

(a) contains an untrue statement of a material fact;

(b) omits to state a material fact required in the report or necessary to make a statement contained in the report not misleading in the light of the circumstances in which it was made.

(2) A person who commits an offence under subsection (1) is liable on summary conviction —

(a) in the case of an individual, to a fine of five thousand dollars or to a term of imprisonment of one year or to both;

(b) in the case of a person other than an individual, to a fine of twenty thousand dollars.

(3) Where the person referred to under subsection (1) is a body corporate and whether or not the body corporate has been prosecuted or convicted, any director or officer of the body corporate who knowingly authorises, permits or acquiesces in the offence also commits an offence and is liable on summary conviction to a fine of five thousand dollars or to a term of imprisonment of one year or to both.

(4) No person commits an offence under subsection

(1) or (3) where the untrue statement or omission —

(a) was unknown to him; and

(b) in the exercise of reasonable diligence, could not have been known to him.

178. Every society and every officer or member thereof or other person who commits an offence under this Act for which no penalty is expressly provided is liable on summary conviction to a fine of two thousand dollars and in the case of a continuing offence to a further fine of one hundred dollars for each day that the offence continues after conviction thereof.

PART XVII - MISCELLANEOUS

179. Unless otherwise provided, a party aggrieved or adversely affected by an order or decision of the Director of Societies under this Act may appeal from the decision or order to the Minister within two months of such order or decision and a further appeal shall lie to a judge in Chambers within one month of such order or decision of the Minister.

180. (1) A copy of any entry in a book of a registered society regularly kept in the course of business shall, if certified in such manner as may be prescribed by the regulations, be received in any legal proceedings, civil or criminal, as prima facie evidence of the existence of such entry and shall be admitted as evidence of the matters, transactions and accounts therein recorded in every case where, to the same extent as, the original entry itself is admissible.

(2) No officer of any such society, in any legal proceedings to which the society is not a party can be compelled to produce any of the books of the society, the contents of which can be proved under subsection (1) or to appear as a witness to prove any matters, transaction or accounts therein recorded, unless the court for special reasons so directs.

(3) Every copy of rules or other instruments or documents, and every extract of an instrument or document, bearing the seal or signature of the Director of Societies, shall be received in evidence without further proof; and every document purporting to be signed by the Director of Societies under this Act shall, in the absence of any evidence to the contrary, be received in evidence without further proof of the signature.

181. Every society registered under this Act is exempt from any stamp duty with which, under any law for the time being in force, instruments executed by or on behalf of such society or by an officer or member relating to the business of such society, any class of such instruments, are respectively chargeable.

182. The Companies Act, The Friendly Societies Act, the Minors Act, the Banks and Trust Companies Regulation Act, the Insurance Act and the Mutual Funds Act¹ do not apply to societies registered under this Act.

183. (1) The Minister may make such regulations as effect to the objectives and provisions of this Act.

(2) Without limiting the generality of subsection (1), regulations may be made requiring the payment of and prescribing the amount of any fee with respect to —

(a) the filing, examination or copying of any document; or

(b) any action that the Director of Societies is required or authorised to take pursuant to this Act;

(c) prescribing the procedures for appeals to the Director of Societies pursuant to section 92;

(d) exempting any society from any provision of this Act; and

(e) prescribing any other matter or thing required or authorised to be prescribed by this Act.

184. (1) The Co-operative Societies Act is repealed.

(2) Notwithstanding subsection (1), where a society is being dissolved or liquidated and dissolved pursuant to the former Act, that Act continues to apply to that society.

185. Instruments or transactions relating to any loan guaranteed under this Act shall be exempt from the payment of stamp duty under the Stamp Act.

186. (1) Any society may, subject to this Act and any regulations made thereunder, amend its bye-laws including the bye-law which declares the name of the society.

(2) No amendment of the bye-laws of a society shall be valid until that amendment has been registered under this Act, for which purpose three copies of the amendment shall be forwarded to the Director of Societies.

(3) If the Director of Societies is satisfied that any amendment of the bye-law, is not contrary to this Act, he may register the amendment.

(4) Where the Director of Societies refuses to register an amendment of a bye-law, an appeal shall lie to the Registered Societies Appeal Tribunal whose decision shall be final.

(5) An amendment which changes the name of the society shall not affect any right or obligation of the society or of any of its members or past members and any legal proceedings pending may be continued by or against the society under its new name.

(6) Where the Director of Societies registers an amendment of the bye-laws of a registered society, he shall issue to the society a copy of the amendment certified by him which shall be conclusive evidence of the fact that the amendment has been duly registered.

PART XVIII - TRANSITIONAL

187. All societies which prior to the commencement of this Act were duly registered under any enactment shall be deemed to be registered under this Act.

4.3. BARBADOS

La legislación se puede bajar o visualizar en el siguiente sitio:

<http://faolex.fao.org/docs/pdf/bar81090.pdf>

4.4. BÉLGICA

CONSEJO NACIONAL DE LA COOPERACION

El siguiente texto se presenta en los idiomas francés y flamenco

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

20 JUILLET 1955

Loi portant institution d'un Conseil national de la Coopération (1)

20 JULI 1955.

Wet houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie (1).

BAUDOUIN, Roi des Belges BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

A tous, présents et à venir, SALUT. Aan allen, tegenwoordigen en toekomstenden, HEIL.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Article 1er . Il est institué un Conseil national de la Coopération, dont la mission consiste à;

Artikel 1. Er wordt een Nationale Raad voor de Coöperatie ingesteld, waarvan de opdracht er in bestaat :

1° Etudier et promouvoir toutes mesures propres à diffuser les principes et l'idéal de la coopération;

1° Passende maatregelen tot verspreiding van de beginselen en het ideaal van de coöperatie te bestuderen en te bevorderen;

2° Adresser à un Ministre et, dans les matières de son ressort, au Conseil central de l'économie, soit à leur demande, soit d'initiative et sous forme de rapports exprimant les différents points de vue exposés en son sein, tous avis ou propositions concernant les problèmes relatifs à l'activité coopérative.

2° Adviezen of voorstellen in verband met de vraagstukken nopens de coöperatieve bedrijvigheid te doen geworden aan een Minister en, voor de aangelegenheden waarvoor hij bevoegd is, aan de Centrale Raad voor het bedrijfsleven, ofwel op hun verzoek, ofwel uit eigen beweging en in de vorm van verslagen met vermelding van de onderscheidene standpunten die in de Nationale Raad uiteengezet worden.

Art. 2. Le Conseil national de la Coopération est composé d'un président, de vingt membres effectifs et de vingt membres suppléants.

Art. 2. De Nationale Raad voor de Coöperatie is samengesteld uit een voorzitter, twintig vaste en twintig plaatsvervangende leden.

Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Roi, en nombre égal, parmi les candidats présentés sur des listes doubles, respectivement par la Commission des Coopératives de consommation, la Commission des Coopératives agricoles, la Commission des Coopératives de production et de distribution et la Commission des Coopératives de service, telles qu'elles sont définies à l'article 3.

De vaste en de plaatsvervangende leden worden door de Koning in gelijk aantal benoemd onder de kandidaten die in dubbeltallen voorgedragen worden, onderscheidenlijk door de Commissie der Verbruikcoöperaties, de Commissie der Landbouwcoöperaties, de Commissie der Productie- en Distributiecoöperaties en de Commissie der Dienstcoöperaties, zoals deze in artikel 3 zijn omschreven.

La présidence est exercée par une personnalité étrangère à l'administration. Le président est nommé par le Roi, après consultation du conseil.

Het voorzitterschap wordt door een niet tot de administratie behorende persoonlijkheid waargenomen. De voorzitter wordt benoemd door de Koning, na raadpleging van de raad.

Les membres du conseil et des commissions exercent leur mandat à titre gratuit.

De leden van de raad en van de commissies oefenen hun mandaat onbetaald uit.

Art. 3. Les commissions, visées à l'article 2, sont composées chacune de membres effectifs et de membres suppléants, dont le nombre est fixé par le Roi.

Art. 3. De commissies, bedoeld in artikel 2, bestaan elk uit vaste en plaatsvervangende leden, wier aantal door de Koning wordt bepaald.

Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organismes agréés conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessous.

De vaste en plaatsvervangende leden worden door de Koning benoemd onder de kandidaten, die in dubbeltallen voorgedragen worden door de overeenkomstig de bepalingen van onderstaand artikel 5 erkende lichamen.

Art. 4. Les commissions visées à l'article 2 ont pour mission :

Art. 4. De opdracht der in artikel 2 bedoelde commissies bestaat in :

1° D'étudier et de promouvoir, chacune en ce qui la concerne, toutes mesures propres à diffuser les principes et l'idéal de la coopération, par voie de proposition au conseil;

1° Het bestuderen en het bevorderen, elk wat haar betreft, van alle geschikte maatregelen tot verspreiding van de beginselen en het ideaal van de coöperatie, bij wege van voorstellen aan de raad;

2° De faire rapport au conseil, soit d'initiative, soit à sa demande, sur les questions qu'il leur soumet.

2° Bij de raad verslag uit te brengen, hetzij uit eigen beweging, hetzij op diens verzoek, over de vraagstukken die hij hun voorlegt.

Art. 5. Le Roi fixe les conditions auxquelles les groupements nationaux représentatifs de sociétés coopératives et les sociétés coopératives non affiliées à un groupement national peuvent être agréés comme organismes habilités à participer à la formation de chacune des commissions.

Art. 5. De Koning stelt de voorwaarden vast, volgens welke de nationale verenigingen die coöperatievennootschappen vertegenwoordigen en de coöperatievennootschappen die

niet bij een nationale groepering zijn aangesloten, kunnen worden erkend als bevoegde lichamen, om deel te nemen aan de samenstelling van de commissies.

Cet arrêté royal dispose notamment que les statuts et le fonctionnement des coopératives affiliées ou non à un groupement national doivent être conformes aux principes coopératifs, c'est-à-dire qu'ils prévoient :

Dit koninklijk besluit bepaalt onder meer, dat de statuten en de werking der al dan niet bij een nationale groepering aangesloten coöperaties met de coöperatiebeginselen moeten overeenstemmen, d.w.z. dat zij voorzien in :

- a) L'adhésion volontaire;
 - b) L'égalité ou la limitation du droit de vote aux assemblées générales;
 - c) La désignation par l'assemblée générale des membres du conseil d'administration et du collège des commissaires;
 - d) Un taux d'intérêt modéré, limité aux parts sociales;
 - e) Une ristourne aux associés.
- a) De vrijwillige toetreding;
 - b) De gelijkheid of de beperking van het stemrecht ter algemene vergadering;
 - c) De aanwijzing van de raad van beheer en van de raad van toezicht door de algemene vergadering der leden;
 - d) Een matige rentevoet, beperkt tot de maatschappelijke aandelen;
 - e) Een ristorno aan de vennoten.

Les sièges sont répartis au sein des commissions entre les organismes agréés, en fonction de l'importance des activités développées, par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions en ce qui concerne la Commission des Coopératives de consommation, la Commission des Coopératives de production et de distribution et la Commission des Coopératives de service et, après consultation du Ministre de l'Agriculture, en ce qui concerne la Commission des Coopératives agricoles. De zetels in de commissies worden onder de erkende organismen, in functie van de belangrijkheid van de aan de dag gelegde bedrijvigheid, verdeeld door de Minister die bevoegd is voor Economische Zaken, voor zover betreft de Commissie der Verbruikscoöperaties, de Commissie der Productie- en Distributiecoöperaties en de Commissie der Dienstcoöperaties, na raadpleging van de Minister van Landbouw voor zover betreft de Commissie der Landbouwcoöperaties.

Art. 6. Le bureau du conseil est composé du président, de quatre vice-présidents et de quatre assesseurs.

Art. 6. Het bureau van de raad bestaat uit de voorzitter, vier ondervoorzitters en vier bijzitters.

Chaque commission désigne parmi ses représentants au conseil un vice-président et un assesseur qui sont de droit respectivement président et assesseur de la commission qui les a désignés.

Elke commissie wijst onder haar vertegenwoordigers in de raad een ondervoorzitter en een bijzitter aan, die rechtens onderscheidenlijk voorzitter en bijzitter zijn der commissie, waardoor zij zijn aangewezen.

Art. 7. Le président du conseil est nommé pour six ans.

Sa nomination est renouvelable.

Art. 7. De voorzitter van de raad wordt voor zes jaar benoemd. Zijn benoeming is hernieuwbaar.

Tous les mandats, tant des membres du conseil que de ceux des commissions, ont une durée de quatre ans.

Ils sont renouvelables.

Alle mandaten, zowel van de leden van de raad als van de commissies, duren vier jaar. Zij zijn hernieuwbaar.

Les modalités de présentation des membres effectifs et suppléants du conseil et des commissions sont déterminées par le Roi.

De modaliteiten in zake voordracht der vaste en plaatsvervangende leden van de raad en commissies worden door de Koning bepaald.

Art. 8. Le Roi détermine les modalités de fonctionnement du conseil, des commissions et de leurs bureaux respectifs.

Art. 8. De Koning stelt de werkingsmodaliteiten van de raad, de commissies en hun respectieve bureau's vast.

Le conseil, après consultation des commissions, établit son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Roi.

De raad maakt na raadpleging van de commissies zijn huishoudelijk reglement op, dat ter goedkeuring aan de Koning wordt voorgelegd.

Pour l'examen des questions particulières et dans les conditions que détermine le règlement d'ordre intérieur, le conseil peut solliciter l'avis de personnes compétentes.

Voor het onderzoek van bijzondere vraagstukken en onder de bij het huishoudelijk reglement bepaalde voorwaarden, mag de raad het advies van bevoegde personen inwinnen.

Art. 9. Le secrétariat du conseil est assuré par les agents de l'Etat désignés à cette fin par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.

Art. 9. Het secretariaat van de raad wordt waargenomen door Staatsbeambten daartoe aangewezen door de Minister die bevoegd is voor Economische Zaken.

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement du conseil sont à charge du budget du Ministère des Affaires économiques.

De uitgaven verbonden aan de werking van de raad komen ten laste van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle sois revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le *Moniteur belge*.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel bekleed en door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt worden.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 1955. Gegeven te Brussel, de 20 Juli 1955.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires économiques,

Van Koningswege :

De Minister van Economische Zaken,

J. REY

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

Gezien en met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

A. LILAR.

4.5 BELIZE

BELIZE - CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT

CHAPTER 313

REVISED EDITION 2000

SHOWING THE LAW AS AT 31ST DECEMBER, 2000

CO-OPERATIVE SOCIETIES

ARRANGEMENT OF SECTIONS

PART I

Preliminary

1. Short title.

2. Interpretation.

PART II

Registration

3. Appointment of Registrar and Assistant Registrars.

4. Societies which may be registered.

5. Conditions of registration.

6. Application for registration.

7. Registration.

8. Societies to be bodies corporate.

9. Evidence of registration.

PART III

Duties and Privileges of Societies

10. Amendment of the by-laws of a registered society.

11. Address of society.

12. Copy of Act, rules, by-laws, etc., to be open to inspection.

13. Disposal of produce to or through a registered society.

14. Creation of charge in favour of registered societies.

15. Charge and set off in respect of shares or interest of members.

16. Shares or interest not liable to attachment or sale.

17. Transfer of interest on death of member.

18. Deposits by or on behalf of infants.
19. Register of members.
20. Proof of entries in books of society.

PART IV

Rights and Liabilities of Members

21. Qualification for membership.
22. Members not to exercise rights until due payment made.
23. Restriction of membership in society.
24. Votes of members.
25. Representation by proxy.
26. Contracts with society of members who are infants.
27. No individual to hold more than one-fifth of share capital of any society.
28. Restrictions on transfer of share or interest.
29. Liability of past member and estate of deceased member for debts of society.

PART V

Property and Funds of Registered Societies

30. Loans made by a registered society.
31. Deposits and loans received by a registered society.
32. Restrictions on other transactions with non-members.
33. Investment of funds.
34. Disposal of profits.

PART VI

Audit, Inspection and Inquiry

35. Audit.
36. Power of Registrar to inspect societies' books, etc.
37. Inquiry and inspection.

PART VII

Dissolution

38. Dissolution.
39. Cancellation of registration of a society due to lack of membership.
40. Effect of cancellation of registration.
41. Liquidation after cancellation of registration of society.
42. Liquidator's powers.
43. Power of Registrar to control liquidation.
44. Enforcement of order.
45. Closure of liquidation.

PART VIII

Surcharge and Attachment

46. Power of Registrar to surcharge officers, etc., of a registered society.
47. Appeals.

PART IX

Disputes

48. Settlement of disputes.
49. Case stated on question of law.

PART X

Rules

50. Rules.

PART XI

Miscellaneous

51. Disposal of fees.
52. Recovery of sums due to Government.
53. Powers to exempt any society from requirements as to registration.
54. Power to exempt societies from provisions of Act.
55. Power to exempt from stamp duty and registration fees.
56. Prohibition of the use of the word "Co-operative".
57. Penalty for non-compliance with Act.
58. Appeal Board.

PART I

Preliminary

1. This Act may be cited as the Co-operative Societies Act.

2. In this Act, unless the context otherwise requires:

“bonus” means a share of the profits of a registered society divided among its members in proportion to the volume of business done with the society by them from which the profits of the society were derived;

“by-laws” means the registered by-laws made by a society in the exercise of any power conferred by this Act, and includes a registered amendment of the by-laws;

“committee” means the governing body of a registered society to whom the management of its affairs is entrusted;

“dividend” means a share of the profits of a registered society divided among its members in proportion to the share capital held by them;

“member” includes a person or registered society joining in the application for the registration of a society, and a person or registered society admitted to membership after registration in accordance with the by-laws;

“officer” includes a chairman, secretary, treasurer, member of committee, or other person empowered under the rules or by-laws to give directions in regard to the business of a registered society;

“registered society” means a co-operative society registered under this Act;

“Registrar” means the Registrar of Co-operative Societies appointed under section 3 and includes any person when exercising such powers of the Registrar as may have been conferred upon him under that section;

“rules” means rules made under this Act.

PART II

Registration

3. The Governor-General may appoint a person to be Registrar of Cooperative Societies for Belize and the Public Services Commission may appoint persons to assist such Registrar, and may, by general or special Order published in the Gazette, confer on any such persons all or any of the powers of a Registrar under this Act.

4. Subject to the provisions hereinafter contained, a society which has as its object the promotion of the economic interests of its members in accordance with co-operative principles, or a society established with the object of facilitating the operations of such a society, may be registered under this Act with or without limited liability as the Registrar may decide, but the liability of a society which includes one or more registered society among its members shall be limited.

5.-(1) No society, other than a society of which a member is a registered society, shall be registered under this Act, which does not consist of at least ten persons each of whom is qualified under section 21 for membership under this Act.

(2) The word “co-operative” or its vernacular equivalent shall form part of the name of every society registered under this Act.

(3) The word “limited” or its vernacular equivalent shall be the last word in the name of every society with limited liability registered under this Act.

(4) When for the purposes of this section any question arises as to age, residence, or occupation of land constituting the qualification of any person, that question shall be decided by the Registrar.

6.-(1) For the purposes of registration an application shall be made to the Registrar.

(2) The application shall be signed-

(a) in the case of a society of which no member is a registered society, by at least ten persons qualified in accordance with the requirements of section 5 (1); and

(b) in the case of a society of which one or more members is a registered society, by a duly authorised person on behalf of every such registered society and, where all the

members of the society are not registered societies, by ten other members, or, when there are less than ten other members, by all of them.

7.-(1) If the Registrar is satisfied that a society has complied with this Act and the rules, and that its proposed by-laws are not contrary to this Act or to the rules, he may, if he thinks fit, register the society and its by-laws.

(2) On registration the society shall pay such fee as may be required by the rules.

8. The registration of a society shall render it a body corporate by the name under which it is registered, with perpetual succession and with power to hold property, to enter into contracts, to institute and defend suits and other legal proceedings, and to do all things necessary for the purpose of its constitution.

9. A certificate of registration signed by the Registrar shall be conclusive evidence that the society therein mentioned is duly registered, unless it is proved that the registration of the society has been cancelled.

PART III

Duties and Privileges of Societies

10.-(1) Any registered society may, subject to this Act and the rules, amend its by-laws, including the by-law which declares the name of the society.

(2) No amendment of the by-laws of a registered society shall be valid until that amendment has been registered under this Act, for which purpose copies of the amendment shall be forwarded to the Registrar.

(3) If the Registrar is satisfied that any amendment of the by-laws is not contrary to this Act or to the rules, he may, if he thinks fit, register the amendment.

(4) An amendment which changes the name of a society shall not affect any right or obligation of the society or of any of its members or past members, and any legal proceedings pending may be continued by or against the society under its new name.

(5) When the Registrar registers an amendment of the by-laws of a registered society, he shall issue to the society a copy of the amendment certified by him, which shall be conclusive evidence of the fact that the amendment has been duly registered.

(6) In this section, "amendment" includes the making of a new by-law and the variation or rescission of a by-law.

11. Every registered society shall have an address, registered in accordance with the rules, to which all notices and communications may be sent, and shall send to the Registrar notice of every change of that address.

12. Every registered society shall keep a copy of this Act and of the rules and of its by-laws and a list of its members open to inspection by members, free of charge, at all reasonable times at the registered address of the society.

13.-(1) A registered society which has as one of its objects the disposal of any article produced or obtained by the work or industry of its members whether the produce of agriculture, animal husbandry, forestry, fisheries, handicrafts or otherwise may provide in its by-laws or may otherwise contract with its members-

(a) that every such member who produces any such article shall dispose of the whole or any specified amount, proportion or description thereof, to or through the society; and

(b) that any member who is proved or adjudged, in such manner as may be prescribed by the rules, to be guilty of a breach of the by-laws or contract shall pay to the society as liquidated damages a sum ascertained or assessed in such manner as may be prescribed by the aforesaid rules.

(2) No contract entered into under this section shall be contested in any court on the ground only that it constitutes a contract in restraint of trade.

14. Subject to any prior claim of the Government on the property of the debtor and to the lien or claim of a landlord in respect of rent or any money recoverable as rent and in the case of real property to any prior registered charge thereon-

(a) any debt or outstanding demand payable to a registered society by any member or past member shall be a first charge on all crops or other agricultural produce, felled timber or other forest produce, marine produce, fish, fresh-water and salt-water, livestock, fodder, agricultural, industrial and fishing implements, plant, machinery, boats, tackle and nets, raw materials, stock in trade and generally all produce of labour and things used in connection with production, raised, purchased or produced in whole or in part from any loan whether in money or in goods given him by the society, but nothing herein contained shall affect the claim of any bona fide purchaser or transferee without notice;

(b) any outstanding demands or dues payable to a registered housing society by any member or past member in respect of rent, shares, loans or purchase money or any other rights or amounts payable to such society shall be a first charge upon his interest in the real property of the society.

15. A registered society shall have a charge upon the shares or interests in the capital and on the deposits of a member or past member or deceased member and upon any dividend, bonus, or profits payable to a member or past member or to the estate of a deceased member in respect of any debt due to the society from such member or past member or estate, and may set off any sum credited or payable to a member or past member or estate of a deceased member in or towards payment of any such debt.

16. Subject to section 15, the share or interest of a member in the capital of a registered society shall not be liable to attachment or sale under any decree or order of a court in respect of any debt or liability incurred by such member, and neither his assignee in insolvency nor a receiver duly appointed shall be entitled to, or have any claim on, such share or interest.

17.-(1) On the death of a member, a registered society may transfer the share or interest of the deceased member to the person nominated in accordance with the rules made in this behalf, or, if there is no person so nominated, to such persons as may appear to the committee to be the legal representative of the deceased member, or may pay to such nominee, or legal representative, as the case may be, a sum representing the value of such member's share or interest, as ascertained in accordance with the rules or by-laws, but-

(a) in the case of a society with unlimited liability such nominee, or legal representative, as the case may be, may require payment by the society of the value of the share or interest of the deceased member ascertained as aforesaid;

(b) in the case of a society with limited liability, the society may transfer the share or interest of the deceased member to such nominee, or legal representative, as the case may be, being qualified in accordance with the rules and by-laws for membership of the society, or on his application within six months of the death of the deceased member to any person specified in the application who is so qualified.

(2) A registered society shall pay all other moneys due to the deceased member from the society to such nominee, or legal representative, as the case may be.

(3) All transfers and payments made by a registered society in accordance with this section shall be valid and effectual against any demand made upon the society by any other person.

18.-(1) A registered society may receive deposits from or for the benefit of infants and it shall be lawful for a registered society to pay such infants the interest which may become due on such deposits.

(2) Any deposits made by an infant may, together with the interest accrued thereon, be paid to that infant, and any deposits made on behalf of an infant may, together with the interest accrued thereon, be paid to the guardian of that infant for the use of the infant.

(3) The receipt of any infant or guardian for money paid to him under this section shall be a sufficient discharge of the liability of the society in respect of that money.

19. Any register or list of members kept by any registered society shall be sufficient evidence of any of the following particulars entered therein unless the contrary is shown-

(a) the date at which the name of any person was entered in such register or list as a member;

(b) the date at which any such person ceased to be a member.

20.-(1) A copy of any entry in a book of a registered society regularly kept in the course of business shall, if certified in such manner as may be prescribed by the rules, be received in any legal proceeding, civil or criminal, as prima facie evidence of the existence of such entry and shall be admitted as evidence of the matters, transactions and accounts therein recorded in every case where, and to the same extent as, the original entry itself is admissible.

(2) No officer of any society as mentioned in subsection (1) shall, in any legal proceedings to which the society is not a party, be compelled to produce any of the society's books, the contents of which can be proved under subsection

(1) or to appear as a witness to prove any matters, transactions or accounts therein recorded, unless the court for special reasons so directs.

PART IV

Rights and Liabilities of Members

21. In order to be qualified for membership of a co-operative society a person, other than a registered society, shall-

- (a) have attained the age of eighteen years;
- (b) be resident within or in occupation of land within the society's area of operations as described by the by-laws.

22. No member of a registered society shall exercise the rights of a member unless or until he has made such payment to the society in respect of membership or acquired such interest in the society, as may be prescribed by the rules or by-laws.

23. Except with the sanction of the Registrar, no person shall be a member of more than one registered society whose primary object is to grant loans to its members.

24. No member of any registered society shall have more than one vote in the conduct of the affairs of the society, but-

- (a) in the case of an equality of votes the chairman shall have a casting vote; and
- (b) in the case of societies of which a registered society is a member that society may have such voting powers as are provided in the rules.

25. A registered society which is a member of any other registered society may appoint any one of its members as its proxy for the purpose of voting in the conduct of the affairs of such other registered society.

26.-(1) The infancy or non-age of any person duly admitted as a member of any registered society shall not debar that person from executing any instrument or giving any acquittance necessary to be executed or given under this Act or the rules and shall not be a ground for invalidating or avoiding any contract entered into by any such person with the society.

(2) Any such contract entered into by any such person with the society, whether as principal or as surety, shall be enforceable at law or in equity against such person notwithstanding his minority or non-age.

27. No member, other than a registered society, shall hold more than one fifth of the share capital of any co-operative society.

28.-(1) The transfer or charge of the share or interest of a member or past member or deceased member in the capital of a registered society shall be subject to such conditions as to maximum holding as may be prescribed by this Act or by the rules.

(2) In the case of a society registered with unlimited liability, a member shall not transfer any share held by him or his interest in the capital of the society or any part thereof, unless-

(a) he has held such share or interest for not less than one year; and

(b) the transfer or charge is made to the society, or to a member of the society, or to a person whose application for membership has been accepted by the committee.

29.-(1) The liability of a past member for the debts of a registered society as they existed on the date on which he ceased to be a member shall not continue for a period of more than two years reckoned from that date.

(2) The estate of a deceased member shall not be liable for the debts of the society as they existed on the date of his decease for a period of more than two years reckoned from the date of his decease.

PART V

Property and Funds of Registered Societies

30.-(1) A registered society shall not, except as provided in section 33, make any loan to any person other than a member, but with the consent of the Registrar, a registered society may make loans to another registered society.

(2) Except with the permission of the Registrar, a registered society shall not lend money on the security of any personal property other than produce or goods in which the society is authorised to deal.

(3) The Minister may, by general or special order, prohibit or restrict the lending of money on mortgage of any description of real property by any registered society.

31. A registered society shall receive deposits and loans from persons who are not members only to such extent and under such conditions as may be prescribed by the rules or by-laws.

32. Except as provided in sections 30 and 31, the transactions of a registered society with persons other than members shall be subject to such prohibitions and restrictions as may be prescribed by the rules.

33. A registered society may invest or deposit its funds-

- (a) in the Government Savings Bank, or with any bank or person carrying on the business of banking approved for this purpose by the Registrar; or
- (b) in any securities issued or guaranteed by a Government under the British Crown; or
- (c) with any other registered society approved for this purpose by the Registrar; or
- (d) in any other mode approved by the Registrar.

34.-(1) At least one-fourth of the net profits of every registered society, as ascertained by the audit prescribed by section 35, shall be carried to a fund to be called the reserve fund, which shall be employed as prescribed by the rules.

(2) Subject to subsection (3), the remainder of such profits and any profits of past years available for distribution may be divided among the members by way of dividend or bonus, or allocated to any funds constituted by the society, to such extent or under such conditions as may be prescribed by the rules or by-laws.

(3) Subsection (2) shall not apply in the case of a society with unlimited liability, no distribution of profits shall be made without the general or special order of the Minister.

(4) Any registered society may, with the sanction of the Registrar, after one-fourth of the net profits in any year has been carried to a reserve fund, contribute an amount not exceeding ten per centum of the remaining net profits to any local charitable purpose or to a common-good fund in Belize.

35.-(1) The Registrar shall audit or cause to be audited, by some person authorised by him by general or special order in writing, the accounts of every registered society once at least in every year.

(2) The audit under subsection (1) shall include an examination of overdue debts, if any, and a valuation of the assets and liabilities of the registered society.

(3) The Registrar and every other person appointed to audit the accounts of a society shall have power when necessary-

(a) to summon at the time of his audit any officer, agent, servant or member of the society whom he has reason to believe can give material information in regard to any transactions of the society or the management of its affairs; or

(b) to require the production of any book or document relating to the affairs of, or any cash or securities belonging to the society, by the officer, agent, servant or member in possession of such book, document, cash or securities.

36.-(1) The Registrar, or any person authorised by general or special order in writing by the Registrar, shall at all times have access to all the books, accounts, papers and securities of a registered society, and shall be entitled to inspect the cash in hand.

(2) Every officer of the society shall furnish such information in regard to the transactions and working of the society as the person making the inspection may require.

37.-(1) The Registrar may of his own motion, and shall on the application of a majority of the committee, or of not less than one-third of the members of a registered society, hold an inquiry or direct some person authorised by him by order in writing in this behalf to hold an inquiry into the constitution, working, and financial condition of a registered society.

(2) All officers and members of the society shall furnish such information in regard to the affairs of the society and produce the cash in hand and such books, accounts, papers and securities of the society as the Registrar or the person authorised by him may require.

(3) The Registrar shall, on the application of a creditor of the registered society, inspect or direct some person authorised by him in writing in this behalf to inspect the books of the society, if the applicant-

(a) proves that an ascertained sum of money is then due to him and that he has demanded payment thereof and has not received satisfaction within a reasonable time; and

(b) deposits with the Registrar such sum as security for the costs of the proposed inspection as the Registrar may require.

(4) The Registrar shall communicate the results of any such inspection to the creditor and to the society into whose affairs the inquiry has been made.

(5) Where an inquiry is held under subsection (1) or an inspection is made under subsection (3), the Registrar may apportion the costs or such part of the costs, as he may think right, between the registered society, the members demanding an inquiry, the officers or former officers of the society, and the creditor, if any, on whose application the inquiry was made.

(6) Any sum awarded by way of costs against any society or person under this section may be recovered, on application to a magistrate's court having jurisdiction in the place where the registered office of the society is situated or Inquiry and inspection.

PART VII

Dissolution

38.-(1) If the Registrar, after holding an inquiry or making an inspection under section 37 or on receipt of an application made by three-fourths of the members of a registered society, is of opinion that the society ought to be dissolved, he may make an order for the cancellation of the registration of the society.

(2) Any member of a registered society may, within two months from the date of an order under subsection (1), appeal from such order.

(3) Where no appeal is presented within two months from the making of an order cancelling the registration of a society, the order shall take effect on the expiry of that period, but where an appeal is presented within two months, the order shall not take effect until it is confirmed.

(4) Where the Registrar makes an order for the cancellation of the registration of a society under subsection (1), he may make such further order as he may think fit for the custody of the books and documents and the protection of the assets of the society until the order cancelling registration takes effect.

(5) No registered society shall be wound up except by an order of the Registrar.

39. The Registrar may, by order in writing, cancel the registration of any registered society other than a society which includes among its members one or more registered societies, if at any time it is proved to his satisfaction that the number of the members has been reduced to less than ten, and every such order shall take effect from the date thereof.

40. Where the registration of a society is cancelled by an order under section 38 or section 39, the society shall cease to exist as a corporate body from the date on which the order takes effect, hereinafter referred to as the date of dissolution, but any privileges conferred on the society by or under sections 14, 15, 16 and 17 shall be deemed to be vested in any liquidator appointed for that society by the Registrar.

41. Where the registration of a society is cancelled under section 38 or 39, the Registrar may appoint one or more persons to be, subject to his direction and control, the liquidator or liquidators of the society.

42.-(1) A liquidator appointed under section 41 shall, subject to the guidance and control of the Registrar and to any limitations imposed by the Registrar by order under section 43 have power to-

(a) determine from time to time the contribution to be made by members and past members or by the estates of deceased members of the society to its assets;

(b) appoint a day by notice before which creditors whose claims are not already recorded in the books of the society shall state their claims for admission or be excluded from any distribution made before they have proved them;

(c) decide any question of priority which arises between creditors;

(d) refer disputes to arbitration and institute and defend suits and other legal proceedings on behalf of the society by his name or office;

(e) decide by what persons and in what proportions the costs of liquidation are to be borne;

(f) give such directions in regard to the collection and distribution of assets as may be necessary in the course of winding up the society;

(g) compromise any claim by or against the society provided the sanction of the Registrar has been first obtained;

(h) call such general meetings of members as may be necessary for the proper conduct of the liquidation;

(i) take possession of the books, documents and assets of the society;

(j) sell the property of the society;

(k) carry on the business of the society so far as may be necessary for winding it up beneficially, but nothing herein contained shall entitle the liquidator of a credit society, to issue any loan; and

(l) arrange for the distribution of the assets of the society in a convenient manner when a scheme of distribution has been approved by the Registrar.

(2) Subject to such rules as may be made in this behalf, any liquidator appointed under this Act shall in so far as such powers are necessary for carrying out the purposes of this section, have power to summon and enforce the attendance of parties and witnesses and

to compel the production of documents by the same means and, so far as may be, in the manner as is provided in the case of a civil court.

43. A liquidator shall exercise his powers subject to the control and revision of the Registrar, who may-

- (a) rescind or vary any order made by a liquidator and make whatever new order is required;
- (b) remove a liquidator from office;
- (c) call for all books, documents and assets of the society;
- (d) by order in writing limit the powers of a liquidator under section 42;
- (e) require accounts to be rendered to him by the liquidator;
- (f) procure the auditing of the liquidator's accounts and authorize the distribution of the assets of the society;
- (g) make an order for the remuneration of the liquidator; or
- (h) refer any subject of dispute between a liquidator and any third party to arbitration if that party has consented in writing to be bound by the decision of the arbitrator.

44.-(1) The decision of an arbitrator on any matter referred to him under section 43 shall be binding upon the parties, and shall be enforceable in like manner as an order made by the Registrar under that section.

(2) An order made by a liquidator or by the Registrar under section 42 or 43 shall be enforced by any civil court having jurisdiction over the place where the registered office of the society is situated in like manner as a decree of that court.

45.-(1) In the liquidation of a society whose registration has been cancelled, the funds, including the reserve fund, shall be applied first to the costs of liquidation, then to the discharge of the liabilities of the society, then to the payment of the share capital and then, where the by-laws of the society permit, to the payment of a dividend at a rate not exceeding ten per centum per annum for any period for which no disposal of profits was made.

(2) When the liquidation of a society has been closed and any creditor of that society has not claimed or received what is due to him under the scheme of distribution, notice of the closing of the liquidation shall be published in the Gazette, and all claims against the funds of the society liquidated shall be prescribed when two years have elapsed from the date of the publication of the Gazette notice.

(3) Any surplus remaining after the application of the funds to the purposes specified in subsection (1) and the payment of any claims for which an action is instituted under subsection (2) shall be disposed of by the Minister for any local co-operative or charitable purpose or contributed to a common-good fund in Belize.

PART VIII

Surcharge and Attachment

46.-(1) Where, in the course of the winding up of a registered society, it appears that any person who has taken part in the organisation or management of such society or any past or present officer of the society has misapplied or retained or become liable or accountable for any money or property of such society or has been guilty of misfeasance or breach of trust in relation to such society, the Registrar may, on the application of the liquidator or of any creditor or contributory, examine into the conduct of such person and make an order requiring him to repay or restore the money or property or any part thereof with interest at such rate not exceeding ten per centum per annum as the Registrar thinks just or to contribute such sum to the assets of such society by way of compensation in regard to the misapplication, retainer, dishonesty or breach of trust as the Registrar thinks just.

(2) This section shall apply notwithstanding that the act is one for which the offender may be criminally responsible.

47. Any person aggrieved by any order of the Registrar made under section 46 may appeal within twenty-one days from the date of such order.

PART IX

Disputes

48.-(1) If any dispute touching the business of a registered society arises-

- (a) among members, past members and persons claiming through members, past members and deceased members; or
- (b) between a member, past member, or person claiming through a member, past member or deceased member, and the society, its committee, or any officer of the society; or
- (c) between the society or its committee and any officer of the society; or

(d) between the society and any other registered society, such dispute shall be referred to the Registrar for decision.

(2) A claim by a registered society for any debt or demand due to it from a member, past member or the nominee or legal representative of a deceased member, shall be deemed to be a dispute touching the business of the society within the meaning of this subsection.

(3) The Registrar may, on receipt of a reference under subsection (1)-

(a) decide the dispute himself; or

(b) refer it for disposal to an arbitrator or arbitrators.

(4) Any party aggrieved by the award of the arbitrator or arbitrators may appeal therefrom to the Registrar within such period and in such manner as may be prescribed.

(5) The award of the arbitrator or arbitrators under subsection (3) shall be enforced in the same manner as if the award had been a judgment of a civil court.

49.-(1) The Registrar at any time when proceeding to a decision under this Act, or the Appeal Board at any time when an appeal has been preferred to them against any decision of the Registrar under this Act, may refer any question of law arising out of such decision for the opinion of the Supreme Court.

(2) The court shall consider and determine any question of law referred under subsection (1) and the opinion given on such question shall be final and conclusive.

PART X

Rules

50.-(1) The Minister may make all such rules as may be necessary for the purpose of carrying out or giving effect to the principles and provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the power conferred by subsection (1), such rules may-

(a) prescribe the forms to be used and the conditions to be complied with in applying for the registration of a society and the procedure in the matter of such applications;

(b) prescribe the conditions to be complied with by persons applying for admission or admitted as members and provide for the election and admission of members from time to time, and the payment to be made and interest to be acquired before exercising rights of membership;

(c) subject to the provisions of section 27, prescribe the maximum number of shares or portion of the capital of a registered society which may be held by a member;

(d) prescribe the extent to which a registered society may limit the number of its members;

(e) provide for the withdrawal and expulsion of members and for the payments to be made to members who withdraw or are expelled, and for the liabilities of past members;

(f) provide for general meetings of the members and for the procedure at such meetings and the powers to be exercised by such meetings;

(g) provide for the appointment, suspension and removal of the members of the committee and other officers, and for the procedure at meetings of the committee, and for the powers to be exercised and the duties to be performed by the committee and other officers;

(h) prescribe the matters in respect of which a society may or shall make by-laws and for the procedure to be followed in making, altering and rescinding by-laws, and the conditions to be satisfied prior to such making, alteration or rescission;

(i) regulate the manner in which funds may be raised by means of shares or debentures or otherwise;

(j) prescribe the conditions to be observed by a registered society applying for financial assistance from Government;

(k) prescribe the payments to be made, the conditions to be complied with, and the forms of the bonds, instruments or other documents to be executed, by members applying for loans or cash credits, the period for which loans may be made or credits granted, and the maximum amount which may be lent and the maximum credit which may be allowed to individual members with or without the consent of the Registrar;

(l) provide for the mode in which the value of a deceased member's interest shall be ascertained, and for the nomination of a person to whom such interest may be paid or transferred;

(m) provide for the mode in which the value of the interest of a member who has become of unsound mind and incapable of managing himself or his affairs shall be ascertained and for the nomination of any person to whom such interest may be paid or transferred;

(n) provide for the formation and the maintenance of reserve funds, and the objects to which such funds may be applied, and for the investment of any funds under the control of any registered society;

(o) prescribe the conditions under which profits may be distributed to the members of a society with unlimited liability and the maximum rate of dividends which may be paid by societies;

- (p) prescribe the accounts and books to be kept by a registered society, and for the periodical publication of a balance sheet showing the assets and liabilities of a registered society;
 - (q) provide for the audit of the accounts of registered societies and for the charges, if any, to be made for such audit and provide for the levy of contributions from all or any registered societies to a fund to be used for the audit and supervision of existing societies and co-operative propaganda and prescribe for the administration of such a fund;
 - (r) prescribe the returns to be submitted by registered societies to the Registrar, and the persons by whom and the form in which the same are to be made;
 - (s) provide for the persons by whom, and the form in which, copies of entries in books of registered societies may be certified;
 - (t) provide for the formation and maintenance of a register of members and, where the liability of members is limited by shares, of a register of shares;
 - (u) provide for the inspection of documents and registers at the Registrar's Office and the fees to be paid therefor and for the issue of copies of such documents or registers;
 - (v) prescribe the manner in which any question as to the breach of any by-law or contract relating to the disposal of produce to or through a society, may be determined, and the manner in which the liquidated damages for any such breach may be ascertained or assessed;
 - (w) prescribe the mode of appointing an arbitrator or arbitrators and the procedure to be followed in proceedings before the Registrar or such arbitrator or arbitrators;
 - (x) prescribe the procedure to be followed by a liquidator appointed under section 41 and the cases in which appeals shall lie from the orders of such liquidator;
 - (y) prescribe the forms to be used, the fees to be paid, the procedure to be observed and all other matters connected with or incidental to the presentation, hearing and disposal of appeals under this Act or the rules.
- (3) All rules made and fees prescribed under this section shall be subject to the approval of the National Assembly.

PART XI

Miscellaneous

51. All fees received by the Registrar under or by virtue of this Act shall be paid by him into the Treasury and form part of the Consolidated Revenue Fund.

52.-(1) All sums due from a registered society or from an officer or member or past member of a registered society as such to the Government may be recovered in the manner provided for the recovery of debts due to the Government under the law for the time being in force.

(2) Sums due from a registered society to the Government and recoverable under subsection (1) may be recovered-

- (a) from the property of the society;
- (b) in the case of a society of which the liability of members is limited, from the members subject to the limit of their liability; and
- (c) in the case of other societies, from the members.

53. Notwithstanding anything contained in this Act the Minister may by special order in each case and subject to such conditions as he may impose, exempt any society from any of the requirements of this Act as to registration.

54. The Minister may by special or general order exempt any registered society or class of societies from any of the provisions of this Act, or may direct that such provisions shall apply to any society or class of societies with effect from such date or with such modifications as may be specified in the order.

55.-(1) The Minister by notification in the Gazette may in the case of any Registered society or class of registered societies, remit-

(a) the stamp duty with which, under any law for the time being in force, instruments executed by or on behalf of a registered society, or by an officer or member, and relating to the business of such society, or any class of such instruments, are respectively chargeable; or

(b) any fee payable for registration under any law for the time being in force.

(2) A notification exempting any registered society from the fees referred to in subsection (1) (b) may provide for the withdrawal of such exemption.

56.-(1) No person other than a registered society shall trade or carry on business under any name or title of which the word "Co-operative" is part without the sanction of the Minister, but nothing in this section shall apply to the use by any person or his successor in

interest of any name or title under which he traded or carried on business at the commencement of this Act.

(2) Any person who contravenes this section commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding one hundred dollars, and in the case of a continuing offence to a further fine not exceeding ten dollars for each day during which the offence continues.

57.-(1) Any registered society or any officer or a member thereof, who willfully neglects or refuses to do any act or to furnish any information required for the purposes of this Act by the Registrar or other persons duly authorised by him in that behalf, commits an offence.

(2) Any person who wilfully or without any reasonable excuse disobeys any summons, requisition or lawful written order issued under this Act, or who fails to furnish any information lawfully required from him by a person authorized to do so under this Act, commits an offence.

(3) Every offence referred to in this section shall be punishable on summary conviction with a fine not exceeding four hundred dollars.

58. For the purposes of this Act there shall be constituted an Appeal Board consisting of a chairman and two other persons appointed by the Minister to which any party aggrieved by any order or decision of the Registrar may, within twenty-one days from the date of such order or decision where no other period is otherwise prescribed, appeal therefrom, and the decision of the Appeal Board shall be final.

BELIZE - CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT **CO-OPERATIVE SOCIETIES RULES**

ARRANGEMENT OF RULES

- 1. Short title.**
- 2. Register of Societies.**
- 3. Original entries.**
- 4. Alterations, etc.**
- 5. Register to be open to inspection.**
- 6. Applications for Registration.**
- 7. Registration.**
- 8. Documents to be forwarded on registration.**
- 9. Reasons for refusal to be given.**
- 10. Register of members.**
- 11. Books and accounts to be kept.**
- 12. Election, etc., of members.**
- 13. Member may withdraw.**
- 14. Expulsion of member.**
- 15. Loss of qualifications.**
- 16. Postponed repayment.**
- 17. Limit of members.**
- 18. Nominees.**
- 19. Division of profits.**
- 20. Maximum liability.**
- 21. General meeting.**
- 22. First meeting.**
- 23. Annual general meeting.**
- 24. Function of annual general meeting.**
- 25. Special general meeting.**
- 26. Quorum at general meeting.**
- 27. Chairman of general meeting.**
- 28. Voting at general meetings.**
- 29. Provisions as to voting.**
- 30. Minutes of general meetings.**
- 31. Election of committee.**
- 32. Appointment of officers.**
- 33. Duties of committee.**
- 34. Meetings of committee.**
- 35. Procedure at meetings.**
- 36. Minutes of meeting.**
- 37. Failure to attend meetings.**
- 38. Vacancies on committee.**
- 39. Borrowing powers.**

40. Banking account.
 41. Employees.
 42. Application for a loan.
 43. Sanction of loan.
 44. Security for loan.
 45. Liability of guarantor.
 46. Purpose of loans.
 47. Documents relating to loans.
 48. Restrictions on loans to defaulters.
 49. Misapplication of loan.
 50. Recovery of loans.
 51. Marketing.
 52. Bad debts.
 53. Preparation of annual accounts and report.
 54. Transfer of shares.
 55. Sales of shares of members in default.
 56. Secretary.
 57. Payment of Secretary.
 58. Suspension of Secretary.
 59. Temporary absence of Secretary.
 60. Treasurer.
 61. Security bonds.
 62. Reserve fund.
 63. Audit of accounts.
 64. By-laws.
 65. Amendment of by-laws.
 66. Copies of entries.
 67. Reference of a dispute to the Registrar for decision.
 68. Reference to arbitration by the Registrar.
 69. Proceedings before the arbitrator or arbitrators.
 70. Proceedings before the Registrar.
-

1. These Rules may be cited as the CO-OPERATIVE SOCIETIES RULES.
2. The Registrar shall keep or cause to be kept at his office a register to be called "the Register of Societies" wherein shall be entered particulars relating to the registration of societies and their by-laws.
3. All original entries in the Register of Societies shall be made by, or under the direction of, the Registrar and shall be signed by him.
4. Every alteration, interlineation or erasure in the Register of Societies shall be initialled by the Registrar.
5. The Register of Societies shall be open to inspection by the public at all reasonable times and free of charge.
6. (1) Every application for the registration of a society shall be submitted to the Registrar in the form prescribed by him.
(2) Three copies of the by-laws which the society proposes to adopt shall be submitted together with the application.
7. Where the Registrar decides to register a proposed society the society and its by-laws shall be registered in the Register of Societies.
8. Upon the registration of a society the Registrar shall forward to the society, free of charge-
 - (a) a certificate of registration;
 - (b) a copy of the by-laws of the society as approved by him and certified under his hand as having been approved by him; and
 - (c) a copy of these Rules and of the Act under which they are made (hereinafter respectively called "these Rules" and "the Act").
9. When the Registrar refuses to register a society or its by-laws he shall communicate to the society in writing his reasons for doing so.

- 10.** Every registered society shall keep a register to be called “the Register of Members” wherein shall be entered-
- (a) the name, address and occupation of each member and a statement of the shares, if any, held by him;
 - (b) the date on which each member's name was entered in the register;
 - (c) the date on which any member ceased to be a member; and
 - (d) the name of the nominee, if any, appointed under rule 18.
- 11.** Every registered society shall keep such accounts and shall use such books as may from time to time be prescribed by the Registrar.
- 12.** The election and admission of members to a registered society, other than original members, shall be in such manner and on such conditions as the by-laws shall prescribe.
- 13.** A member may withdraw from a registered society by giving Member may written notice to the Secretary, but such withdrawal shall be without prejudice to the provisions of section 29 (1) of the Act.
- 14.** If a member acts in contravention of these Rules or the by-laws or acts in any way detrimental to the interests of the registered society, such member may be expelled by a vote of two-thirds of the members present at a general meeting upon a charge communicated to him in writing by the committee not less than one week before the meeting. Such expulsion shall, however, be without prejudice to the provisions of section 29 (1) of the Act.
- 15.** Any member who loses any of the qualifications for membership prescribed by the Act or these Rules or the by-laws shall cease to be a member of the registered society and the committee shall cause his name to be struck off the Register of Members without prejudice to any liabilities of such person under section 29 (1) of the Act.
- 16.** In the case of any registered society of limited liability holding deposits or loans from non-members, no member withdrawing, removed or expelled therefrom shall be entitled to a repayment of any money paid by him towards the purchase of shares until after the lapse of two years.
- 17.** No registered society shall fix any limit to the number of its members except with the special approval of the Registrar in writing.
- 18.** (1) Every appointment of a nominee by any member of a registered society for the purposes of section 17 of the Act shall be made in writing signed by the member in the presence of two attesting witnesses.
- (2) No member of a registered society with share capital shall be entitled to appoint more than one nominee unless that member holds more than one share.
- (3) In any case where more than one nominee is appointed by any member the number of shares to be transferred or the exact proportion of the amount available that is to be transferred to each of these nominees shall be specified at the time of the appointment.
- (4) Every appointment of a nominee shall be recorded in the Register of Members.
- (5) For the purpose of a transfer to a nominee, the value of any share or interest shall be represented by the sum actually paid for that share or interest by the member holding it unless the by-laws of the registered society otherwise provide.
- (6) Where any money is paid to a nominee who is a minor, a receipt given either by the minor or by his guardian shall be sufficient discharge to the registered society.
- 19.** (1) Unless otherwise authorised by the Minister under section 34 (3) of the Act no dividend or payment on account of profits shall be made by a society registered with unlimited liability until the reserve fund has reached a proportion of not less than one-tenth of the society's total liabilities.
- (2) No registered society shall pay a dividend if the rate of interest on loans granted by it to its members exceeds twelve per cent per annum.
- (3) No registered society shall pay a dividend on share capital exceeding six per cent per annum. Any dividend authorised shall be paid on all shares fully paid-up and in the possession of the same member throughout the previous fiscal year, except that shares which become fully paid-up during the previous fiscal year shall be entitled to a proportionate part of such dividend from the first day of the month following such payment in full,
- (4) Subject to the provisions of section 34 (3) of the Act relating to a registered society with unlimited liability a bonus based on wages, or on the value of the products, of a member, or a bonus or rebate on patronage calculated in proportion to the amount of the business

done by each member with the registered society may be distributed periodically to the members from surplus funds after the deduction of all expenditure and after making provision for bad and doubtful debts and making allocation to the reserve fund.

20. (1) Every registered society shall, from time to time, fix at a general meeting the maximum liability it may incur in loans or deposits whether from members or non-members.

(2) The maximum so fixed shall be subject to the sanction of the Registrar, who may at any time reduce it. No registered society shall receive loans or deposits which will make its liability exceed the limit sanctioned by the Registrar.

21. The supreme authority in a registered society shall be vested in the general meeting of members at which every member has a right to attend and vote on all questions. Subject to the provisions of sections 24 and 25 of the Act, each member shall have one vote only which shall be exercised in person and not by proxy.

22. The first meeting of members shall have the same powers as are given to the annual general meeting, and shall be held not later than one month after the receipt of the certificate of registration of the society.

23. The annual general meeting of members shall be convened by the committee as soon as the report on the audit of the accounts of the registered society by the Registrar or person authorised by him is received by the committee. At least eight days' notice shall be given by the Secretary before any such general meeting is held: Provided that the Registrar may at any time after the audit of the accounts has been completed convene the annual general meeting which shall proceed as if it had been convened by the committee.

24. The functions of the annual general meeting shall include-

(a) confirmation of the minutes of the previous annual meeting and of any intervening special general meeting;

(b) consideration of the reports of the committee and the balance sheet together with the report on the audit of the accounts of the registered society for the previous year as prepared by the Registrar or the person authorised by him;

(c) approval of the accounts or, if the accounts are not approved, causing the Secretary to notify the Registrar who shall consider the matter and make his decision thereon and such decision as to the correctness of the accounts shall be final and conclusive;

(d) hearing of and deciding upon any complaints brought by members aggrieved by a decision of the committee: Provided that notice of such complaints to be brought before the meeting has been given to the Secretary at least two days prior to the meeting; and

(e) transacting of any other general business of the registered society.

25. A special general meeting of members may be convened at any time by the committee; and on receipt of a demand stating the object of the proposed meeting signed by not less than one-fifth of the members of the registered society, if such registered society is composed of less than one hundred members, or by twenty-five members if such registered society consists of more than one hundred members, it shall be the duty of the chairman of the committee to convene such a meeting giving eight days' notice. If the chairman of the committee fails to convene a meeting within fourteen days from the receipt of a demand as aforesaid the members applying for such a meeting shall have the right to convene the meeting by notice which shall contain the object of the proposed meeting and a statement to the effect that the meeting is convened on the failure of the chairman of the committee to convene the meeting demanded: Provided that the Registrar or a person authorised by him may at any time summon a special general meeting of the registered society in such manner and at such time and place as he may direct. He may also direct what matters shall be discussed at the meeting. Such meeting shall have all the powers of a meeting called according to these Rules.

26. (1) For the purposes of the annual or a special general meeting ten members or ten per cent of the membership, whichever is greater, shall form a quorum: Provided that when any meeting is summoned by the Registrar any members present at such meeting shall be deemed to form a quorum.

(2) If within one hour after the time fixed for any meeting other than a meeting convened by the Registrar, the members present are not sufficient to form a quorum such meeting shall be considered as dissolved if convened on the demand of members; in all other cases it shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place and a notice to that effect shall be posted by the Secretary within twenty-four hours, and if at the adjourned meeting a quorum is not present within one hour from the time appointed for the meeting the members present shall form a quorum.

27. (1) The Chairman of the committee or in his absence any other person elected by a majority of those present shall preside at the annual or special general meeting: Provided that the Registrar or a person appointed by him shall preside at any meeting convened by himself or on his demand.

(2) The Secretary or in his absence any other person nominated in writing by the Chairman shall act as Secretary at the meeting. The Chairman, if necessary, may nominate other officers to assist at the meeting.

(3) The Chairman may by the decision of the meeting adjourn the meeting from time to time and from place to place but no business shall be transacted at any meeting so adjourned other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place.

28. Any question submitted to the decision of the members present at a meeting, unless otherwise dealt with in these Rules, shall be decided by a majority of votes.

29. (1) At any meeting a resolution put to the vote shall be decided on a show of hands unless voting by call of names or a ballot is demanded by at least five of the members present before the declaration of the result of the show of hands, and in such case voting by call of names or a ballot shall be taken as the case may be.

(2) The Chairman shall have an ordinary vote and in case of an equality of votes shall be entitled to a casting vote. In the case of a meeting convened by the Registrar and presided over by him or his representative, he or his representative shall not be entitled to vote except on an equality of votes, in which case they shall have a casting vote.

(3) In respect of every resolution put to the vote the Chairman shall declare whether it has been carried or lost, and whether on a show of hands or unanimously or by a particular majority, and an entry to that effect in the minute book shall be conclusive evidence of anything therein.

30. Minutes of the meetings shall be entered in the minute book by the Secretary and shall contain-

(a) the number and names of the members present at the meeting and the name of the Chairman or of the person who presided at the meeting;

(b) the time fixed for the meeting and the time the meeting commenced;

(c) the total number of members on the date on which the meeting was held; and

(d) all resolutions passed or decisions made at the meeting.

31. (1) The committee of a registered society shall consist of seven members.

(2) At the first meeting the committee shall be elected and shall hold office until the election of another committee at the first annual general meeting.

(3) On the election to the committee-

(a) at the first annual general meeting, of the seven members; and

(b) at each annual general meeting thereafter, of such number of members as may be necessary to fill vacancies arising from expiry of term of office or otherwise; the three members receiving the largest number of votes shall hold office for two years and the remainder for one year.

(4) Election to the committee shall be by ballot and an equality of votes shall be decided by the drawing of lots.

(5) A member of the committee ceasing to be such by expiry of term of office or by resignation shall be eligible for re-election.

(6) No member shall be eligible for election to the committee unless he has been nominated in writing by two other members and such nomination has been filed with the Secretary not less than three days before the date fixed for the meeting at which the election is to take place. Immediately upon the receipt of each such nomination the Secretary shall post it on the notice board and notify the member concerned of his nomination.

32. At their first meeting, which shall be held within ten days after their election, or at any subsequent meeting in the event of a vacancy among the officers, the committee shall appoint from its own number a Chairman and a Treasurer and, from its own number or otherwise, a Secretary who shall not by virtue only of his appointment as Secretary be a member of the committee.

33. (1) The committee shall represent the registered society before all competent public authorities and in all dealings and transactions with third persons, with power to institute or defend suits brought in the name of or against the registered society, and in general it shall carry out such duties in the management of the affairs of the registered society as have

not been specially assigned by these Rules or the by-laws to general meeting or to any other officer of the registered society.

(2) The committee shall always keep a copy of the latest annual balance sheet of the registered society together with the report referred to in rule 23 of these Rules hung in a conspicuous place at the registered office of the society.

34. The committee shall meet as often as the business of the registered society may require and in any case not less frequently than once a month. Meetings of the committee shall be summoned by the Secretary.

35. At each committee meeting the Secretary shall-

- (a) read the minutes of the preceding meeting;
- (b) produce such records relating to the finances of the registered society as the committee may require;
- (c) produce a statement showing the loans overdue for determination by the committee as to the action to be taken in each case;
- (d) produce applications for loans, if any, for determination by the committee; and
- (e) submit any other business for consideration by the committee.

36. Minutes of committee meetings shall be recorded by the Secretary in the minute book and shall be signed by the Chairman or other presiding member and by the Secretary and shall contain the following particulars-

- (a) the names of the members present and the date of the meetings;
- (b) the name of the Chairman or other presiding member; and
- (c) a short statement of all matters discussed and decisions made and a record as to whether each decision was made unanimously or by a majority.

37. Any member of the committee who, without due excuse approved by the committee, fails to attend at three consecutive meetings of the committee shall be deemed to have vacated his office which shall thereupon be filled as provided by rule 38 of these Rules.

38. (1) Vacancies occurring on the committee shall be filled within eight days by the election of substitutes elected by the remaining members of the committee: Provided that when such election does not take place the Registrar may appoint the required substitutes. (2) Any substitutes elected or appointed under paragraph (1) of this rule shall not hold office beyond the first meeting of the committee following the next annual general meeting.

39. The committee may borrow money on behalf of the registered society to an amount not exceeding such total amount as may have been fixed in accordance with rule 20 of these Rules.

40. The committee may, subject to the approval of the Registrar, open a banking account. All cheques shall be signed by two members of the committee and the Secretary: Provided that with the authority in writing of the Registrar previously obtained, cheques may be signed by one member of the committee and the Secretary.

41. The committee may-

- (a) appoint such of the clerks or employees as it considers necessary; and
- (b) fix the salary, wages or remuneration of every clerk or employee.

RULES 42 - 50 APPLICABLE TO CREDIT SOCIETIES

42. Members who desire to obtain a loan shall submit an application to the committee stating the amount and the purpose for which the loan is required, the term for which it is asked, the manner of repayment, and the names of the proposed sureties or any other security which is offered.

43. (1) The committee shall consider at a meeting every application for a loan and if the committee is satisfied with the trustworthiness of the applicant, the sufficiency of the security offered and the prospects of advantage to the borrower, in the way of increased production or economy or otherwise, it may sanction the loan.

(2) No person other than members of the committee and the Secretary and the Registrar and his staff shall be present at any meeting of the committee when an application for a loan is under consideration. A member of the committee who applies for a loan or who is proposed as surety for a loan shall withdraw while the relevant application is being discussed. If there is a difference of opinion concerning the granting of a loan, the voting shall be taken by ballot.

(3) The proceedings with regard to loans at committee meetings shall be kept secret, and, if in the opinion of a majority of the members of the committee, a member of the committee or officer of the registered society infringes this rule he shall forthwith cease to be a member of the committee or officer of the registered society or both, as the case may be. This rule shall apply to the Secretary notwithstanding rule 56 (6) of these Rules.

44. Loans, when approved by the committee, shall be granted to members who are able to obtain one or more sureties approved by the committee, or who can give other security to the satisfaction of the committee.

45. (1) On the instrument creating liability on the part of a guarantor there shall be specifically stated the maximum amount for which such guarantor is liable.

(2) That portion of a loan for which guarantors are required may be guaranteed by one or more persons each of whom shall be deemed to be severally, and not jointly, liable for an amount not exceeding-

(a) a sum equal to the total amount for which guarantors are required after deduction of any payment made in reduction of the loan; or

(b) the maximum amount specified in accordance with paragraph (1) of this rule, whichever is the less.

(3) The provisions of this rule shall have effect notwithstanding anything contained in the Bills of Exchange Act.

46. (1) No loan shall be made except for a purpose to be approved in each case by the committee.

(2) All loans made shall be applied by the borrowing members to such purpose as the committee has approved.

47. When a loan is sanctioned by the committee the borrower shall be notified to that effect, and, before the amount is advanced, the borrower and his sureties shall execute an instrument in writing setting out the terms of repayment of the loan and containing such other terms and conditions as the committee may consider necessary.

48. Where a member-

(a) is in default in the payment of a loan or of an instalment of a loan; and

(b) does not satisfy the committee that such default is due to a good cause, such member shall not be eligible to receive another loan from the registered society.

49. Where the committee is satisfied that a member of the registered society who has obtained a loan has applied the proceeds thereof to a purpose other than the purpose which is stated in the application therefor under rule 42 of these Rules, the committee may, by notice in writing to the debtor, demand payment of the loan before the agreed date of payment.

50. Where-

(a) a loan or an instalment of a loan has not been paid on the date on which it became due; and

(b) no extension for the payment thereof has been given to the debtor by the committee, the committee shall take steps for the recovery of the same by referring the matter to the Registrar as prescribed in section 48 of the Act.

RULE 51 APPLICABLE TO MARKETING SOCIETIES

51. (1) Every member of the registered society shall deliver to the registered society, at such place as the committee shall direct, such amount of articles produced or obtained by him as may be prescribed in the by-laws or in the relevant contract, to be disposed of by the registered society.

(2) Any member who is adjudged, in accordance with the provisions of section 48 of the Act, to be guilty of a breach of the by-laws or the relevant contract as the case may be shall pay to the society as liquidated damages such sum as may be specifically assessed or ascertained in manner prescribed by the by-laws or by the relevant contract and such sum shall be deemed to be a debt due to the registered society.

52. The committee may, with the approval of the Registrar, cause bad debts to be written off the books of the registered society in such manner and at such times as the Registrar may deem fit.

53. The committee shall in every year and as soon as conveniently possible within such time as the Registrar may direct-

- (a) cause the Secretary to prepare and send to the Registrar the yearly balance sheet closed on the 31st December of the preceding year or any other date that may be specially approved in writing by the Registrar for a particular society, together with a detailed statement of the profit and loss account; and
- (b) prepare a report on the year's working of the registered society to be presented to the annual general meeting.

54. (1) Any share may be transferred with the approval of the committee to any other member at the option of the transferor, but if the transferee is not a member, he must be approved of as a member by the committee, or the general meeting according to the by-laws relating to the admission of members before the transfer may be registered; and if the by-laws require a member to hold more than one share, the transferee must acquire by the transfer, or by the transfer and allotment, the number so required to be held before the transfer may be registered.

(2) Special transfer forms shall be provided by the Registrar.

(3) No transfer of a share shall be valid and effective unless and until such transfer has been registered by the Secretary on the direction of the committee.

(4) No transfer of a share shall be registered if made by a member indebted to the registered society without special order of the committee, and until the transfer of a share is registered no right shall be acquired against the registered society by the transferee, nor shall any claim of the registered society upon the transferor be affected thereby.

55. The committee may, in default of payment by any member indebted to the registered society, apply the sum paid up for the time being on any shares held by such member in or towards the discharge of the debt so due and of any expense in or about the same, and the defaulting member shall cease to have any further claim in respect of such shares.

56. (1) The committee shall appoint a Secretary and, unless the person so appointed is a member of the committee, shall have power to fix the remuneration for his services.

(2) The Secretary, if a member of the committee, shall be unpaid.

(3) No appointment made under paragraph (1) of this rule shall be valid and effective, and no remuneration fixed thereunder shall be payable or receivable, unless approved by the Registrar. Every such approval shall be communicated in writing by the Registrar to the committee.

(4) In the event of failure on the part of the committee to appoint a Secretary, the Registrar shall appoint a Secretary, and unless the person so appointed is a member of the committee, the Registrar shall fix his remuneration. Every appointment made by the Registrar under this paragraph shall be valid and effective, and every remuneration fixed by the Registrar shall be payable and receivable, as if made or fixed by the committee.

(5) The Secretary shall-

(a) keep a correct record of all meetings of the registered society and of the committee, conduct correspondence on behalf of the registered society, and carry out such other duties as may be assigned to him by the committee;

(b) be present at the office of the registered society during the hours of business as fixed from time to time by the committee;

(c) record the whole of the financial transactions of the registered society in the books provided for that purpose; prepare the annual statement of accounts and balance sheet; have charge of documents, books and vouchers for payments and receipts on behalf of the registered society;

(d) receive all monies due or payable to the registered society and issue receipts to the payer for same, make payments as authorised by the committee, obtaining the payee's signature for same;

(e) receive all applications for loans and bring them before the committee; prepare receipts and other documents, in the form prescribed, for signature by borrowers prior to their taking the loan sanctioned;

(f) from monies collected by him on behalf of the registered society, deposit with the Treasurer all sums in excess of an amount to be fixed from time to time by the committee and obtain from him a receipt for same; and

(g) issue a receipt when receiving money from the Treasurer: Provided that the by-laws of a registered society may provide that any or all of the duties imposed upon the Secretary under subparagraphs (c), (d) and (e) of this paragraph may be assigned to the Treasurer.

(6) Subject to the provisions of rules 43 (3) and 58 of these Rules the services of the Secretary, where he is not a member of the committee, may be determined by one month's notice or on payment of one month's remuneration in lieu of such notice.

(7) The Secretary may resign his office by giving one month's notice to the committee in writing.

(8) On the occurrence of a vacancy in the office of the Secretary, the provisions of this rule shall apply *mutatis mutandis* to the filling of such vacancy.

57. The remuneration of the Secretary, if any, shall be paid from the funds of the registered society monthly in arrear.

58. (1) The committee may at any time suspend the Secretary for any irregularity in the performance of his duties and shall, if the Secretary so requests, refer the matter forthwith to the Registrar who shall approve or disallow the suspension and communicate his decision in writing to the Secretary and to the committee. On notification of the Registrar's approval of the suspension the services of the Secretary shall be determined without further notice.

(2) In the event of the suspension of the Secretary the committee shall forthwith appoint a substitute to hold office during the period of such suspension and shall report the name of such substitute to the Registrar.

59. (1) The Secretary shall not absent himself from duty save with the permission of the committee previously obtained.

(2) During the absence of the Secretary, the committee shall appoint a temporary Secretary.

60. (1) The committee shall appoint one of the members of the committee, other than the Chairman, to be the Treasurer.

(2) The Treasurer shall-

(a) receive from the Secretary as provided in rule 56 (5) (g) of these Rules monies collected by the latter on behalf of the registered society and furnish him with a receipt;

(b) advance money to the Secretary for payments and obtain from him a receipt;

(c) place to the account of the registered society in such bank as may be approved by the Registrar any amount in his hands in excess of the amount fixed from time to time by the committee;

(d) keep a record of all monies received by him from the Secretary and of all monies paid to the Secretary;

(e) carry out such duties relating to the financial affairs of the registered society as may be assigned to him by the committee or by the by-laws.

61. (1) The person or persons having custody of the funds and of the securities of the registered society shall give security for such amount as may be determined by, and to the satisfaction of, the committee.

(2) Every such security and the amount thereof shall be subject to the approval of the Registrar to be signified in writing to the committee.

62. (1) The reserve fund of a registered society, created in pursuance of the provisions of section 34 (1) of the Act, may, with the sanction of the Registrar-

(a) be utilised in the business of the registered society; or

(b) be applied to meet occasional deficiencies incurred by the registered society.

(2) In sanctioning the utilisation or application of the reserve fund under paragraph (1) of this rule, the Registrar may impose such terms and conditions as he may deem fit.

63. (1) In pursuance of the provisions of section 35 of the Act, the accounts of every registered society shall be audited once at least in every year by some person authorised by the Registrar. Such person shall have access to all the books and accounts of the registered society and shall examine every balance sheet and annual return of the receipts and expenditure, funds and effects of the registered society, and shall verify the same with the accounts and vouchers relating thereto, and shall either sign the same as found by him to be correct, duly vouched and in accordance with the Act, and shall report to the Registrar accordingly, or shall specially report to the Registrar in what respects he finds the same incorrect, unvouched or not in accordance with the Act. The Registrar shall thereupon forward the report of such person to the committee.

(2) Any expense incurred in carrying out the requirements of this rule shall, where required by the Registrar, be paid by the registered society.

64. (1) The by-laws of a proposed society shall contain provision in respect of the following matters-

(a) the name of the society;

(b) the registered address of the society;

(c) the objects for which the society was established;

(d) the purposes to which the funds may be applied;

(e) the qualifications for membership, the terms of admission of members, and the mode of election;

(f) the nature and extent of the liability of members; and

- (g) the manner of raising funds, including the maximum rate of interest on deposits.
- (2) If the objects of the proposed society include the creation of funds to be lent to the members, the proposed by-laws shall, in addition, contain provision in respect of the following matters-
- (a) the occupation or residence of the members;
 - (b) the conditions on which loans may be made to members, including-
 - (i) the rate of interest; and
 - (ii) the maximum amount which may be lent to a member; and
 - (c) the consequences, if any, of default in the payment of any sum due on account of shares.

65. (1) Amendment of the by-laws of a registered society, under section 10 of the Act, shall be by resolution at an annual or special general meeting and shall be approved by not less than three-fourths of the members present and eligible to vote.

(2) A copy of a resolution passed under paragraph (1) of this rule, together with three copies of the proposed amendment, shall be forwarded to the Registrar.

66. For the purposes of section 20 of the Act a copy of an entry in the book of a registered society may be certified by a certificate written at the foot of such copy, declaring that it is a true copy of such entry, and that the book containing the entry is still in the custody of the registered society. Such certificate shall be dated and signed by the Secretary and one member of the committee.

67. (1) Reference of a dispute to the Registrar for decision under the provisions of section 48 (1) of the Act may be made -

- (a) by the committee; or
 - (b) by the registered society in pursuance of a resolution taken in general meeting; or
 - (c) by any party to the dispute.
- (2) Every reference under this rule shall be made by a statement in writing addressed to the Registrar. Such statement shall-
- (a) be dated;
 - (b) specify the dispute;
 - (c) set out full particulars of the dispute; and
 - (d) be signed by the party making it.

68. (1) Where, in pursuance of the provisions of section 48 (3) (b) of the Act, the Registrar decides to refer a dispute to arbitration, such decision shall be embodied in an order of reference under his hand.

(2) Every order of reference under this rule shall-

- (a) specify the name, surname, place of abode and occupation of the arbitrator or arbitrators;
- (b) set out the dispute and full particulars thereof; and
- (c) limit the time within which the award shall be forwarded by the arbitrator or arbitrators to the Registrar: Provided that, on good cause shown to his satisfaction, the Registrar may by a further order enlarge the time whether before or after the time limited by the order of reference has Reference to arbitration by the Registrar.

(3) Where the Registrar decides to refer a dispute to more than one arbitrator, such reference shall be to three arbitrators, of whom one shall be nominated by each of the parties to the dispute and the third shall be nominated by the Registrar and shall act as Chairman.

(4) Where under paragraph (3) of this rule reference is made to three arbitrators, the following provisions shall have effect-

- (a) if any party to the dispute fails to nominate an arbitrator within such time as the Registrar may specify, the Registrar may make the nomination himself;
- (b) if an arbitrator nominated by one of the parties to the dispute dies, or refuses or neglects to act, or by absence or otherwise becomes incapable of acting, the Registrar shall call upon the party concerned to nominate a new arbitrator within such time as the Registrar may specify, and if no new arbitrator is nominated accordingly, the Registrar may nominate one himself;
- (c) if the arbitrator who dies, or refuses or neglects to act, or becomes incapable of acting, was nominated by the Registrar, a new arbitrator shall be nominated in this place by the Registrar; and
- (d) the opinion of the majority of the arbitrators shall prevail.

69. (1) The proceedings before the arbitrator or arbitrators shall, as nearly as possible, be conducted in the same way as proceedings before a court of law, and in particular the following provisions shall have effect in respect thereof-

- (a) notice of the time and place at which the proceedings are to be held shall be given to the parties to the dispute, and such notice shall be a ten days' notice;
 - (b) a record of the evidence adduced before the arbitrator or arbitrators shall be made, dated and signed by the arbitrator or arbitrators;
 - (c) documents produced as exhibits before the arbitrator or arbitrators shall be marked, dated and initialled by the arbitrator or arbitrators and shall be attached to the file of the proceedings; and
 - (d) in the absence of any party notified to attend, the dispute may be decided by the arbitrator or arbitrators *ex parte*.
- (2) The award of the arbitrator or arbitrators shall-
- (a) be in writing;
 - (b) be dated and signed by the arbitrator or arbitrators, and
 - (c) state the amount of the costs and expenses of the arbitration, if any, and by which party or parties to the dispute the same are to be paid.
- (3) Upon the completion of the proceedings, the arbitrator or arbitrators shall forward to the Registrar-
- (a) the file of the proceedings; and
 - (b) the award.

70. Where, in pursuance of the provisions of section 48 (3) (a) of the Act, the Registrar exercises the power of deciding a dispute himself, the proceedings before him in relation thereto shall, as nearly as possible, be conducted in the same way as proceedings before a court of law and the provisions of rule 69 of these Rules shall apply *mutatis mutandis* to such proceedings.

4.6. BOLIVIA

LEY 351/2013 (Del 11 de abril de 2013)

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A :

LEY GENERAL DE COOPERATIVAS

TÍTULO I

DE LA NATURALEZA DE LAS COOPERATIVAS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto regular la constitución, organización, funcionamiento, supervisión, fiscalización, fomento y protección del Sistema Cooperativo en el Estado Plurinacional de Bolivia, en sujeción a las disposiciones de la Constitución Política del Estado.

Artículo 2. (FINALIDAD). La presente Ley tiene por finalidad el promover actividades de producción y administración de servicios que contribuyan al desarrollo económico social del país, de acuerdo a su identidad cultural, productiva y calidad cooperativa, a través de políticas financieras y sociales.

Artículo 3. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). La presente Ley se aplica a todas las cooperativas, cualquiera sea: el sector en el que desarrollan sus actividades, asociadas y asociados, y a las instituciones auxiliares del cooperativismo, en la jurisdicción territorial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Artículo 4. (DEFINICIÓN DE COOPERATIVA). Es una asociación sin fines de lucro, de personas naturales y/o jurídicas que se asocian voluntariamente, constituyendo cooperativas, fundadas en el trabajo solidario y de cooperación, para satisfacer sus necesidades productivas y de servicios, con estructura y funcionamiento autónomo y democrático.

Artículo 5. (INTEGRACIÓN A LA ECONOMÍA PLURAL). La organización económica social cooperativa forma parte de la economía plural y es de interés del Estado

Plurinacional, su fomento y protección, para contribuir al desarrollo de la democracia participativa y justicia social.

Artículo 6. (PRINCIPIOS COOPERATIVOS).

I. El sistema cooperativo en el marco de la Constitución Política del Estado, se sustenta en los principios de:

1. Solidaridad. Es el interés por la colectividad, que permite desarrollar y promover prácticas de ayuda mutua y cooperación entre sus asociadas y asociados y de éstos con la comunidad.
2. Igualdad. Las asociadas y los asociados tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades de acceder a los beneficios que brinda la Cooperativa, sin que existan preferencias ni privilegios para ninguna asociada o asociado.
3. Reciprocidad. Prestación mutua de bienes, servicios y trabajo para beneficio común, desarrollados entre asociadas y asociados, entre cooperativas y de éstas con su entorno, en armonía con el medio ambiente.
4. Equidad en la Distribución. Todas las asociadas y los asociados deben recibir de forma equitativa, los excedentes, beneficios y servicios que otorga la cooperativa, en función de los servicios utilizados o la participación en el trabajo.
5. Finalidad Social. Primacía del interés social por encima del interés individual.
6. No Lucro de Sus Asociados. Exclusión de actividades con fines especulativos, de forma que no se acumulen las ganancias para enriquecer a las asociadas o los asociados.

II. Adicionalmente, las cooperativas se regirán por los siguientes principios del movimiento cooperativo internacional:

1. Asociación Voluntaria y Abierta. El ingreso y retiro de las asociadas y los asociados es voluntario, sin discriminación de ninguna naturaleza, dispuestos a asumir responsabilidades inherentes a la calidad de asociada y asociado.
2. Gestión Democrática. Las cooperativas son administradas y controladas democráticamente por sus asociadas y asociados, quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los miembros elegidos para representar a su cooperativa, responden solidariamente ante sus asociadas y asociados. Cada asociada y asociado tendrá derecho a un solo voto.
3. Participación Económica de Sus Integrantes. Las asociadas y los asociados participan en la formación del fondo social y en la distribución equitativa del excedente de percepción.
4. Autonomía e Independencia. Las cooperativas son organizaciones de ayuda mutua, con autonomía de gestión, independientemente de las formas de financiamiento.
5. Educación, Capacitación e Información. Las cooperativas promoverán la educación cooperativa, capacitación e información sobre los valores, principios, naturaleza y beneficios del cooperativismo a sus asociadas y asociados, consejeras y consejeros, empleadas y empleados y población en general.
6. Integración Solidaria Entre Cooperativas. Las cooperativas sirven a sus asociadas y asociados eficazmente, y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, regionales, departamentales, nacionales e internacionales.
7. Interés por la Colectividad. Las cooperativas trabajan en el desarrollo sostenible de su entorno, mediante políticas de responsabilidad social, aceptadas por sus asociadas y asociados.

Artículo 7. (VALORES COOPERATIVOS). El sistema cooperativo, en el desarrollo de sus actividades asume, respeta y practica los valores de ayuda mutua, complementariedad, honestidad, transparencia, responsabilidad y participación equitativa.

Artículo 8. (PROPIEDAD COLECTIVA E INDIVIDUAL). Las aportaciones de las asociadas y los asociados, a las cooperativas, consistentes en efectivo, bienes, derechos y/o trabajo, constituyen propiedad colectiva. El instrumento de trabajo podrá ser de propiedad individual.

Artículo 9. (ACTO COOPERATIVO).

I. El acto cooperativo se caracteriza por ser voluntario, equitativo, igualitario, complementario, recíproco, no lucrativo y solidario.

II. Son actos cooperativos aquellos realizados por:

1. La cooperativa con sus asociadas y asociados.
2. Entre sus asociadas y asociados.
3. Las cooperativas entre sí.

Artículo 10. (DERECHO COOPERATIVO). El derecho cooperativo, como parte del derecho social, es el conjunto de principios, normas jurídicas, jurisprudencia, precedente administrativo y doctrina atinentes a este campo, que determinan y regulan las relaciones

emergentes del acto cooperativo. En el ámbito cooperativo no se constituirá una jurisdicción especial.

Artículo 11. (APLICACIÓN PREFERENTE). Lo dispuesto en la presente Ley será de aplicación preferente en el ámbito cooperativo, por la naturaleza, especialidad y particularidad de la organización económica social cooperativa.

CAPÍTULO II

DE LAS COOPERATIVAS

Artículo 12. (PERSONALIDAD JURÍDICA).

I. Las cooperativas para su funcionamiento requieren personalidad jurídica, la que tendrá vigencia a partir de la fecha en que la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFCCOP, emita la respectiva Resolución e inscriba en el Registro Estatal de Cooperativas.

II. El procedimiento para la obtención de personalidad jurídica y registro será determinado a través de Decreto Supremo reglamentario. III. Se prohíbe la transferencia a cualquier título, de las resoluciones que otorgan la personalidad jurídica de las cooperativas.

Artículo 13. (DENOMINACIONES Y SÍMBOLOS).

I. La denominación debe ser precedida por la palabra “Cooperativa”, seguida de la actividad a la que corresponda y ser distinta de cualquier otra con el mismo objeto social.

II. Las cooperativas autorizadas y registradas en los términos de la presente Ley, serán las únicas facultadas para utilizar las denominaciones “Cooperativa”, “Cooperativista”, “Cooperativismo”, así como, para usar los símbolos del cooperativismo reconocidos internacionalmente.

III. Se prohíbe a toda persona natural o jurídica, utilizar las denominaciones descritas en el párrafo anterior en actividades que no se desarrollen de conformidad con la presente Ley y que induzcan a confusión con las cooperativas.

Artículo 14. (RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD LIMITADA). Las cooperativas adoptarán el régimen de Responsabilidad Limitada - R.L., debiendo expresarlo en su denominación.

Artículo 15. (AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES). La ampliación de actividades dentro de su objeto social, que no estén contempladas en el estatuto orgánico, debe ser autorizada en Asamblea General Extraordinaria y registrada ante la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFCCOP.

Artículo 16. (PROHIBICIONES).

I. Las cooperativas no podrán conceder privilegio a ninguna de las asociadas y los asociados, fundadoras, fundadores, directoras, directores, tampoco otorgarán preferencias del fondo social, ni exigir a las nuevas afiliadas y los nuevos afiliados que suscriban más certificados de aportación que los establecidos en sus estatutos orgánicos o que contraigan obligaciones superiores a las de quienes ya forman parte de la Cooperativa.

II. En las cooperativas de producción, el trabajo es personal y se prohíbe el trabajo delegado, salvo excepciones temporales establecidas en el Decreto Supremo reglamentario.

III. En las cooperativas de servicios el aporte y la participación de la asociada o del asociado es directa y se prohíbe su representación, salvo lo previsto en la presente Ley sobre las modalidades de representación democrática en las cooperativas de amplia base asociada y territorial.

Artículo 17. (CONTRATACIÓN DE PERSONAL).

I. Las cooperativas de servicios y de servicios públicos, podrán contratar personal en el marco de la Ley General del Trabajo.

II. Las Cooperativas de producción, sólo podrán contratar personal administrativo, de asesoramiento y servicio técnico.

Artículo 18. (LEYES SOCIALES).

I. Las cooperativas están obligadas al cumplimiento de las leyes sociales vigentes.

II. Podrán constituir otros regímenes de seguro social de corto plazo, a fin de mejorar estos servicios en conformidad a la Ley.

III. Podrán constituir fondos de contingencia para cubrir los riesgos de sus operaciones económicas y de sus asociadas y asociados.

Artículo 19. (CONVENIOS Y CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS).

I. La suscripción de convenios y contratos según su naturaleza, tipo, monto y pertinencia, deberán ser aprobados por la Asamblea General Extraordinaria de la cooperativa, conforme a Decreto Supremo reglamentario, estatuto orgánico y reglamentos internos de la cooperativa.

II. En el marco de la economía plural reconocida por la Constitución Política del Estado y para el mejor desarrollo de sus fines, las cooperativas podrán celebrar contratos o convenios, con otras empresas e instituciones nacionales o extranjeras, resguardando su cualidad cooperativa, conforme a la presente Ley, su Decreto Supremo reglamentario y las leyes sectoriales correspondientes. Los contratos y convenios referidos en el presente párrafo no constituyen contratos de asociación.

Artículo 20. (DOMICILIO LEGAL). Las cooperativas fijarán su domicilio legal en el lugar donde realizan y/o concentran sus principales actividades o el mayor volumen de éstas, dentro del radio de acción autorizado. Podrán constituir sucursales, previa autorización de la autoridad competente.

Artículo 21. (RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA). Las consejeras y los consejeros, asociadas y asociados que incurran en actos que contravengan la normativa interna de la cooperativa, serán procesadas y procesados, sancionadas y sancionados de acuerdo al estatuto orgánico y reglamentos internos, en el marco del derecho cooperativo.

Artículo 22. (RESPONSABILIDADES CON TERCEROS). Serán penal y/o civilmente responsables ante terceros, las consejeras y los consejeros, asociadas y asociados que comprometan los intereses de la cooperativa, contrariando las leyes y disposiciones vigentes.

CAPÍTULO III

DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS

Artículo 23. (SECTORES Y CLASES DE COOPERATIVAS).

I. Las cooperativas se clasifican en los siguientes sectores:

1. Sector de Producción:

- a) Minera.
- b) Artesanal.
- c) Industrial.
- d) Agropecuaria.
- e) Otros emergentes de las necesidades sociales.

2. Sector de Servicios:

- a) Vivienda.
- b) Ahorro y crédito.
- c) Consumo.
- d) Educación.
- e) Transporte.
- f) Turismo.
- g) Salud.
- h) Comercialización para coadyuvar la actividad cooperativa.
- i) Otros emergentes de las necesidades sociales.

3. Sector de Servicios Públicos:

- a) Telecomunicaciones.
- b) Electricidad.
- c) Agua y Alcantarillado.
- d) Otros emergentes de las necesidades sociales.

II. Para los efectos de esta Ley, por su extensión, las cooperativas pueden ser las siguientes:

- 1. Cooperativas de Objeto Único. Aquellas que se constituyen y organizan para realizar un solo objeto de acuerdo a disposición sectorial.
- 2. Cooperativas Integrales. Aquellas que en cualquiera de los sectores o actividades que realizan, abarcan todas las etapas de una cadena productiva, en un mismo proceso económico de producción, industrialización y/o comercialización.
- 3. Cooperativas Multiactivas. Aquellas que realizan diversas actividades en los sectores de producción y de servicios.

TÍTULO II

DE LA ORGANIZACIÓN Y JERARQUÍA COOPERATIVA

CAPÍTULO I

SISTEMA COOPERATIVO

Artículo 24. (ESTRUCTURA). El Sistema Cooperativo está compuesto de la siguiente manera:

I. Del Estado:

1. Entidades promotoras de políticas públicas, fomento y protección cooperativa:

a) Ministerio del área.

b) Ministerios y entidades estatales relacionadas con el cooperativismo.

2. Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFCCOP.

3. Entidades de fiscalización sectoriales.

II. Del Movimiento Cooperativo:

1. Cooperativas de Primer Grado. Las cooperativas de base.

2. Cooperativas de Segundo Grado. Las centrales de cooperativas de acuerdo a las características de cada sector económico.

3. Cooperativas de Tercer Grado. De acuerdo a las características de cada sector económico e institucional son:

a) Federación regional.

b) Federación departamental.

4. Cooperativas de Cuarto Grado. Federaciones nacionales por sectores económicos.

5. Cooperativa de Quinto Grado. La Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia - CONCOBOL.

III. De las Instituciones Auxiliares:

1. Organismos de apoyo en todo el sistema de educación.

2. Centros de desarrollo, formación y asistencia tecnológica, administración cooperativa y gestión ambiental.

3. Entidades financieras de fomento cooperativo.

4. Organismos de cooperación.

5. Otras entidades de fomento cooperativo organizadas de acuerdo a Ley.

CAPÍTULO II

DE LA CONSTITUCIÓN Y REGISTRO

Artículo 25. (CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ORGANIZADOR). Para la organización de una cooperativa, los interesados deben conformar un comité organizador, encargado de efectuar los actos iniciales para la constitución de la Cooperativa.

Artículo 26. (CONVOCATORIA PARA CONSTITUCIÓN). El Comité Organizador convocará a la Asamblea General Constitutiva de la Cooperativa, en la cual se aprobará el estatuto orgánico y el estudio socio-económico, y se elegirá a los miembros del Consejo de Administración y de Vigilancia, quienes suscribirán el Acta de Constitución de la Cooperativa, en presencia de un representante de la Federación de Cooperativas del sector correspondiente o por el representante oficial del Ministerio del área; si no hubieren, podrán firmar en presencia de un Notario de Fe Pública o en su caso de cualquier autoridad del lugar.

Artículo 27. (DURACIÓN). Las cooperativas tienen duración indefinida.

Artículo 28. (NÚMERO DE ASOCIADAS Y ASOCIADOS). Para la constitución y vigencia de una Cooperativa de primer grado, el número de asociadas y asociados será ilimitado y en ningún caso será inferior a diez (10).

Artículo 29. (REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA). Para la obtención de la personalidad jurídica y la inscripción de la Cooperativa en el Registro Estatal de Cooperativas, se procederá de acuerdo al Decreto Supremo reglamentario.

Artículo 30. (ESTATUTO ORGÁNICO).

I. El estatuto orgánico de las cooperativas es la norma interna establecida por las asociadas y asociados, que rige y regula la constitución, organización, funcionamiento, objeto, condiciones de participación, regímenes económicos, sociales y disolución. Debe estar legalmente homologado por la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFCCOP, la que deberá pronunciarse dentro del plazo establecido en las normas de procedimiento en el Decreto Supremo reglamentario.

II. El estatuto orgánico de constitución aprobado por la Asamblea General de la Cooperativa, debe estar firmado por el directorio elegido de los Consejos de

Administración y Vigilancia, en representación de las asociadas y los asociados que lo aprueban.

Artículo 31. (COOPERATIVAS DE SEGUNDO A QUINTO GRADO).

I. La constitución de una cooperativa de segundo a quinto grado, seguirá el mismo procedimiento establecido para constituir una cooperativa de primer grado.

II. El mínimo de asociados para constituir una Cooperativa de segundo a quinto grado es de tres (3).

CAPÍTULO III

DE LAS ASOCIADAS Y ASOCIADOS

Artículo 32. (ASOCIADAS Y ASOCIADOS). Son asociadas y asociados de las cooperativas, las personas naturales o jurídicas que libremente decidan ingresar, cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley.

Artículo 33. (REQUISITOS DE ADMISIÓN). Para ser asociada o asociado de una cooperativa se requiere:

1. Para Cooperativas de Producción:

a) Ser mayor de edad.

b) Suscribir un certificado de aportación de acuerdo a lo establecido en el estatuto orgánico.

c) Otras que establezcan su estatuto orgánico y reglamento interno.

2. Para Cooperativas de Servicios:

a) Ser persona natural y cuando corresponda persona jurídica.

b) Suscribir uno o más certificados de aportación de acuerdo a lo establecido en el estatuto orgánico.

c) Otras que establezcan su estatuto orgánico y reglamento interno.

3. Para Cooperativas de Segundo a Quinto Grado:

a) Personería jurídica de cooperativas, centrales y federaciones.

b) Suscribir un certificado de aportación de acuerdo a lo establecido en el estatuto orgánico.

Artículo 34. (PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADA O ASOCIADO). La calidad de asociada o asociado se pierde por:

1. Renuncia voluntaria.

2. Exclusión.

3. Expulsión.

4. Abandono.

5. Extinción de la personalidad jurídica.

6. Muerte.

Artículo 35. (SUCESIÓN). En caso de muerte de una asociada o un asociado, los sucesores podrán designar a uno de ellos para asumir la titularidad del certificado de aportación de acuerdo al estatuto orgánico.

Artículo 36. (DEVOLUCIÓN DEL VALOR DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN).

I. La devolución del valor de los certificados de aportación a las asociadas o los asociados que hubieren dejado de pertenecer a la cooperativa, es obligatoria. La modalidad, condiciones y plazos estarán determinados por el Decreto Supremo reglamentario de la presente Ley y por el estatuto orgánico.

II. Las asociadas o los asociados que hayan dejado de pertenecer a la Cooperativa y que por el tiempo de dos años computables desde su desvinculación, no reclamen la devolución del valor de sus certificados de aportación, prescribirán a favor del Fondo Social de la Cooperativa.

Artículo 37. (DERECHOS, OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES Y RESTRICCIONES DE ASOCIADAS Y ASOCIADOS).

I. Derechos:

1. Cada asociada o asociado tiene derecho a un solo voto en la toma de decisiones y en ningún caso podrá ser representado por terceros mediante poder u otros documentos.

2. Acceso a la educación cooperativa.

3. Percibir la cuota parte que les corresponde de los excedentes de percepción.

4. Ser informados del funcionamiento o administración de la cooperativa en forma transparente y periódica o cuando lo soliciten formalmente.

II. Obligaciones:

1. La asociada o el asociado de nuevo ingreso, compartirá plenamente las responsabilidades de todas las obligaciones anteriormente contraídas por la Cooperativa.
2. Concurrir a las asambleas y cumplir con las obligaciones que se determinen en el estatuto orgánico.
3. Practicar los valores y principios cooperativos establecidos en la presente Ley.

III. Responsabilidades:

1. Acatar las disposiciones de la presente Ley y su Decreto Supremo reglamentario, el estatuto y los reglamentos internos de su cooperativa.
2. Serán directamente responsables ante la cooperativa, la asociada y el asociado que con sus actos u omisiones lesionen los intereses de la Cooperativa.

IV. Restricciones:

1. Ninguna asociada o ningún asociado, podrá pertenecer a los Consejos de Administración o Vigilancia de más de una Cooperativa simultáneamente, de la misma o de otra clase, en cualquier parte del país.
2. Ninguna asociada o ningún asociado de una Cooperativa de Producción, Servicios y Servicios Públicos, podrá pertenecer a un sindicato laboral de la misma.
3. Ninguna asociada o ningún asociado de una Cooperativa de Producción, podrá pertenecer a más de una Cooperativa de Producción. En el caso de las cooperativas de servicios se actuará de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo reglamentario.

CAPÍTULO IV

DEL FONDO SOCIAL

Artículo 38. (FONDO SOCIAL). El Fondo Social de la Cooperativa, estará constituido por los recursos propios obtenidos y destinados al cumplimiento de su objeto social, así como por los recursos provenientes de:

1. Las aportaciones de las asociadas y los asociados.
2. Los bienes muebles, inmuebles e intangibles de propiedad de la Cooperativa.
3. Las donaciones y legados.
4. Las reservas y los fondos previstos en la presente Ley.
5. Los excedentes destinados al Fondo Social.
6. Cesión de derechos, otorgados por personas naturales o jurídicas.

Artículo 39. (PROPIEDAD DEL FONDO SOCIAL). El Fondo Social es de propiedad conjunta de las asociadas y los asociados de la Cooperativa.

Artículo 40. (CERTIFICADO DE APORTACIÓN).

- I. Es el título representativo del aporte y pertenencia que otorga la Cooperativa, y establece la calidad de asociada o asociado.
 - II. Las aportaciones podrán ser en efectivo, bienes, derechos o trabajo.
 - III. Los certificados de aportación serán nominativos, individuales, iguales en valor e inalterables.
 - IV. Los certificados de aportación no son documentos mercantiles, ni podrán circular en el mercado de valores.
 - V. El valor del certificado de aportación será actualizado de acuerdo a reglamentación interna, aprobada por la Asamblea General.
 - VI. Las transferencias se sujetarán a esta Ley y su Decreto Supremo reglamentario.
- El Decreto Supremo reglamentario de la presente Ley y el estatuto orgánico de la cooperativa establecerán el mecanismo de valoración de los aportes que no sean en dinero, actualización del certificado de aportación y se determinará al momento de ingreso de la nueva asociada o asociado.

Artículo 41. (CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN).

- I. Es el documento representativo de deuda emitida por la Cooperativa conforme al reglamento específico aprobado en Asamblea General Extraordinaria, cuyas condiciones y peculiaridades serán establecidas en el Decreto Supremo reglamentario de la presente Ley y estatuto orgánico de la cooperativa.
- II. El certificado de participación podrá ser otorgado preferentemente a las asociadas y los asociados o a personas ajenas a la Cooperativa.

Artículo 42. (CONSTITUCIÓN DE RESERVA Y FONDOS DE LOS EXCEDENTES). Las cooperativas estarán obligadas a constituir los siguientes fondos no repartibles:

1. Reserva Legal, que se conformará con el mínimo del diez por ciento (10%) del resultado de los estados financieros anuales;
2. Fondo de Educación, al que se destinará el cinco por ciento (5%) del resultado de los estados financieros anuales.

3. Fondo de Previsión Social y Apoyo a la Colectividad, el que se constituirá con el cinco por ciento (5%) del resultado de los estados financieros anuales.
4. Los que se establezcan en el estatuto orgánico.

Artículo 43. (USO DE LA RESERVA Y FONDOS OBLIGATORIOS). La forma de organizar y utilizar la reserva y los fondos obligatorios, que señala el Artículo anterior, deberá fijarse en los estatutos orgánicos tomando en cuenta:

1. La necesidad de incrementar la reserva legal hasta alcanzar por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del Fondo Social.
2. La necesidad de ampliación de los Fondos de Educación y de Previsión Social y Apoyo a la Colectividad, como medio para aumentar la capacidad de servicios de la cooperativa con sus asociadas y asociados y a la colectividad. En caso de superarse el porcentaje de la reserva legal, se destinará a incrementar estos fondos.

Artículo 44. (RESERVA LEGAL). La reserva legal se constituye para prevenir riesgos y afrontar las pérdidas y/o siniestros que hubiere.

Los recursos utilizados de esta reserva, se reconstituirán en los términos de esta Ley, su Decreto Supremo reglamentario y el estatuto orgánico de cada Cooperativa.

Artículo 45. (FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL Y APOYO A LA COLECTIVIDAD). El Fondo de Previsión Social y Apoyo a la Colectividad tendrá por objeto proporcionar el mayor bienestar social a las asociadas y los asociados, sus beneficiarios y la colectividad, en el marco de la presente Ley, el Decreto Supremo reglamentario y el estatuto orgánico de cada cooperativa.

Artículo 46. (FONDO DE EDUCACIÓN COOPERATIVO). El Fondo de Educación Cooperativo será utilizado, de manera permanente, mediante cursos de Educación Cooperativa, promoción del derecho cooperativo, formación integral, capacitación, seminarios de actualización, investigación y desarrollo e innovación. En ningún caso el Fondo de Educación será destinado a otras actividades que no sean las referidas en este Artículo.

Artículo 47. (EXCEDENTES DE PERCEPCIÓN). Son los recursos resultantes de las actividades de las cooperativas, una vez deducida la totalidad de los costos, tributos, fondos y reserva; en aplicación del principio de equidad en la distribución, podrán repartirse entre las asociadas y los asociados en razón a los servicios utilizados o la participación en el trabajo.

Artículo 48. (DEPÓSITOS). Los recursos pertenecientes a las cooperativas serán depositados preferentemente en cooperativas de ahorro y crédito o en el sistema bancario del lugar de la Cooperativa. En las localidades que careciesen de estas entidades financieras, el tesorero será depositario de los recursos de la Cooperativa y responsable de ellos, solidaria y mancomunadamente con el Presidente del Consejo de Administración.

Artículo 49. (DONACIONES). Las donaciones que reciban las cooperativas para el cumplimiento de su objeto social, formarán parte del Fondo Social y se destinarán conforme la voluntad del donante cuando esté estipulada.

CAPÍTULO V

DEL FUNCIONAMIENTO

Artículo 50. (ESTRUCTURA DE LA COOPERATIVA). Las cooperativas tendrán la siguiente estructura:

1. La Asamblea General.
2. El Consejo de Administración.
3. El Consejo de Vigilancia.
4. El Tribunal Disciplinario o de Honor y comités que establezca el estatuto orgánico o las asambleas generales.

Artículo 51. (SOBERANÍA DE LA ASAMBLEA). La Asamblea General es soberana y la autoridad suprema en una cooperativa; sus decisiones obligan a todas las asociadas y los sociados, presentes y ausentes, siempre que se hubiesen adoptado conforme a la presente Ley, el Decreto Supremo reglamentario, el estatuto orgánico y el reglamento interno.

Artículo 52. (CLASES DE ASAMBLEAS).

- I. Las asambleas pueden ser ordinarias o extraordinarias, se celebrarán en la forma y fechas establecidas en el estatuto orgánico de la Cooperativa.
- II. Las cooperativas de amplia base asociativa, podrán adoptar la modalidad de asambleas de delegados, con el propósito de hacer más efectiva la participación democrática de las asociadas y los asociados, de acuerdo al Decreto Supremo reglamentario de la presente Ley.

Artículo 53. (ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA). La Asamblea General Ordinaria, se llevará a cabo por lo menos una vez al año, cuando lo establezca el estatuto orgánico, siendo sus atribuciones, sin perjuicio de otras que señalen los estatutos, las siguientes:

1. Conocer y pronunciarse sobre los informes y memoria anual de los consejos, gerencia y comités.
2. Conocer y pronunciarse sobre los estados financieros de la última gestión económica, previo pronunciamiento del Consejo de Vigilancia y de “auditoria”, cuando corresponda.
3. Considerar y pronunciarse sobre las políticas, planes, programas y proyectos que presente el Consejo de Administración.
4. Considerar y aprobar el Plan de Operaciones y Presupuesto de la siguiente gestión.
5. Elegir y remover a los integrantes de los Consejos de Administración, Consejo de Vigilancia, Tribunal Disciplinario o de Honor y comités que sean necesarios para la buena administración de la Cooperativa.
6. Determinar el destino de los excedentes de percepción de acuerdo a los principios establecidos en la presente Ley.
7. Deliberar y resolver sobre las propuestas que presente el Consejo de Administración, de Vigilancia, comités o las asociadas y asociados ante la Asamblea.
8. Conocer y aprobar la valorización de los certificados de aportación.
9. Aprobar, cuando corresponda, las asignaciones para las consejeras y los consejeros e integrantes de los diferentes comités.
10. Conocer y resolver todos los asuntos que no estén dentro de las competencias de los otros órganos de gobierno de la Cooperativa.

Artículo 54. (ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA). La Asamblea General Extraordinaria, se llevará a cabo las veces que fuere necesario para la buena marcha de la Cooperativa, conforme al estatuto orgánico, siendo sus atribuciones, sin perjuicio de otras que señale el estatuto, las siguientes:

1. Autorizar la enajenación de bienes, la realización de inversiones y endeudamiento de la Cooperativa, que estén por encima de los límites establecidos para el Consejo de Administración, conforme el Decreto Supremo reglamentario.
2. Aprobar los convenios, contratos y acuerdos, que cuenten con los estudios y/o justificaciones que demuestren la viabilidad social y económica.
3. Considerar y resolver los actos de los integrantes de los Consejos de Administración y Vigilancia contrapuestos al estatuto orgánico, la presente Ley y disposiciones conexas y complementarias.
4. Aprobar la inclusión de asociadas y asociados, cuando corresponda, de acuerdo a su estatuto orgánico.
5. Aprobar la exclusión de asociadas o asociados.
6. Aprobar la fusión, disolución, escisión, cambio de nombre u otro cambio sustancial de la Cooperativa por dos tercios de votos de las asociadas y asociados asistentes a la Asamblea.
7. Considerar las modificaciones o reformas del estatuto orgánico, con la aprobación de dos tercios de votos de las asociadas y asociados asistentes en la Asamblea.
8. Considerar cualquier otro asunto para la buena marcha de la Cooperativa, que no sea de competencia de la Asamblea General Ordinaria.

Artículo 55. (CONVOCATORIA A LAS ASAMBLEAS). Corresponde bajo responsabilidad y sanción, al Consejo de Administración, la convocatoria a las Asambleas Generales, de conformidad con lo definido en su estatuto orgánico. De no hacerlo, atañe al de Vigilancia; en su defecto lo harán con orden de prelación, a petición formal de un número de asociadas y asociados legalmente habilitados establecido en el Decreto Supremo reglamentario de la presente Ley y el estatuto orgánico, las centrales, federaciones regionales, sectoriales, departamentales, nacionales o la Confederación Nacional de Cooperativas - CONCOBOL, y en última instancia, lo hará la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFCCOP.

Artículo 56. (ELECCIÓN DE LOS CONSEJOS). La elección de los Consejos de Administración y Vigilancia se realizará de acuerdo al estatuto orgánico y Reglamento interno.

Artículo 57. (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN). El Consejo de Administración es la instancia ejecutiva, que debe cumplir con las políticas y decisiones internas aprobadas por las asambleas de asociadas y asociados. Ejerce la representación de la Cooperativa, en los términos fijados por el estatuto orgánico, en el marco de esta Ley.

Artículo 58. (CONSEJO DE VIGILANCIA). El Consejo de Vigilancia es la instancia de control y fiscalización del manejo económico-financiero, legal y el funcionamiento de la Cooperativa, vela porque el Consejo de Administración y las asociadas y los asociados cumplan con la normativa vigente, el estatuto orgánico y sus reglamentos internos.

Artículo 59. (DURACIÓN DE LA GESTIÓN).

I. El período de funciones como miembro titular de los Consejos de Administración y Vigilancia, estará determinado en el estatuto orgánico, pudiendo ser el máximo de tres (3) años con posibilidad de su reelección por una sola vez de manera continua, y máximo de seis (6) años en las cooperativas de servicios públicos o de amplia base societaria, cuando se adopte la renovación parcial de sus consejos sin posibilidades de reelección continua, de acuerdo al Decreto Supremo reglamentario.

II. En los casos en que la normativa sectorial establezca otros plazos de duración de gestión de las consejeras y los consejeros de administración y vigilancia, la misma será aplicada a la Cooperativa en el marco del párrafo precedente.

III. Las cooperativas que modifiquen su estatuto orgánico, en lo referente a la duración del período de gestión de las consejeras y los consejeros, será aplicado en el siguiente período.

Artículo 60. (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN). Ejerce la representación legal de la Cooperativa y responde sobre sus obligaciones y responsabilidades a la Asamblea General.

Artículo 61. (GERENTE). Las cooperativas podrán tener gerente, quien se constituirá en la instancia operativa y coadyuvará en la ejecución de los acuerdos y disposiciones del Consejo de Administración. Éste y otros gerentes especializados, si los hubiere, serán elegidos por el Consejo de Administración de acuerdo a reglamentación interna.

Artículo 62. (AUDITORÍA INTERNA). Las cooperativas podrán contar con servicios de auditoría interna para su mejor administración.

Artículo 63. (AUDITORÍA EXTERNA). Al final de cada gestión anual deberá realizarse una auditoría externa cuando el caso así lo requiera o esté dispuesta en el Decreto Supremo reglamentario de la presente Ley o por disposición sectorial correspondiente. El Consejo de Vigilancia seleccionará al auditor externo.

Artículo 64. (DICTAMEN DE VIGILANCIA). El Consejo de Vigilancia emite informes generales y dictámenes sobre las actividades o decisiones del Consejo de Administración, que serán de conocimiento del Consejo de Administración y para su consideración ante la Asamblea General, la que tomará decisiones en única instancia.

Artículo 65. (CONSEJERA - CONSEJERO). Cualquier asociada o asociado de la Cooperativa puede ser miembro de los Consejos de Administración, Vigilancia, comités o comisiones bajo las siguientes condiciones:

1. Estar al día en el cumplimiento de las obligaciones con la Cooperativa.
2. Ser ciudadana o ciudadano, boliviana o boliviano residente en el país y estar en ejercicio pleno de sus derechos constitucionales.
3. No desempeñar cargo alguno en la dirección de partidos políticos u ocupar cargos jerárquicos en entidades públicas o privadas, incompatibles con el cooperativismo.
4. No ser trabajador en relación de dependencia laboral con la Cooperativa, conforme lo establecerá el Decreto Supremo reglamentario.
5. No ser cónyuge, ni pariente de alguno de los miembros de los consejos directivos, ni de cargos ejecutivos hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, para las cooperativas de servicios públicos y hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, para las cooperativas de producción.
6. No haber participado en acciones contrarias a los valores, principios e intereses de alguna entidad Cooperativa.
7. No tener sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal.
8. Preferentemente contar con capacitación o experiencia cooperativista, conforme a su estatuto orgánico.
9. Otros que se establezcan en el estatuto orgánico de cada Cooperativa en el marco de esta Ley y el Decreto Supremo reglamentario.

Artículo 66. (FACULTADES Y NÚMERO DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS).

- I. Las facultades y deberes de los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia, así como su composición, serán fijados por el Decreto Supremo reglamentario de la presente Ley y el estatuto orgánico de cada Cooperativa.
- II. Las asignaciones que perciban las consejeras y los consejeros deben ajustarse a las posibilidades reales de la Cooperativa y estar aprobadas en el presupuesto anual.

Artículo 67. (REMOCIÓN DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS). Las consejeras y los consejeros podrán ser removidos de sus cargos por decisión de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria por acciones contrarias a los valores y principios del cooperativismo o haber causado daño económico a la Cooperativa y otros establecidos en su estatuto orgánico, de acuerdo a Decreto Supremo reglamentario.

Artículo 68. (SECCIONES). Las cooperativas podrán establecer secciones entendidas como parte de la estructura auxiliar de la Cooperativa, que coadyuvan al logro de su objeto principal y que se encuentran señaladas en su estatuto orgánico. La creación de secciones nuevas, debe necesariamente ser comunicada a la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFCCOP, para su conocimiento y registro.

CAPÍTULO VI

DE LAS COOPERATIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

Artículo 69. (RÉGIMEN DE COOPERATIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS). En el marco de lo establecido en el Artículo 335 de la Constitución Política del Estado, las cooperativas de servicios públicos señaladas en el Artículo 23, parágrafo I y numeral 3 de la presente Ley, se registrarán por :

1. El control gubernamental que se ejerce por las entidades públicas determinadas en la presente Ley y las leyes sectoriales, en función a los servicios públicos que prestan.
2. La elección de los Consejos de Administración y Vigilancia, estarán sujetos a lo establecido en el estatuto orgánico, bajo la supervisión del Tribunal Supremo Electoral Plurinacional.
3. En las cooperativas de amplia base asociativa, se instituye la modalidad de Asambleas de Delegados, con el propósito de hacer más efectiva la participación democrática de las asociadas y asociados, de acuerdo al Decreto Supremo reglamentario de la presente Ley.

Artículo 70. (INTERÉS COLECTIVO). Las cooperativas de servicios públicos son de interés colectivo, en ese ámbito, el Estado fomentará su desarrollo y protección en beneficio de sus asociadas y asociados así como de la población, para asegurar la continuidad y calidad en la prestación de los servicios.

CAPÍTULO VII

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 71. (DISOLUCIÓN). Son causales de disolución las siguientes:

1. Por voluntad de las dos terceras partes de sus asociadas y asociados, expresada en Asamblea General Extraordinaria.
2. Por disminución del número de las asociadas y los asociados a menos del mínimo establecido en la presente Ley.
3. Por haber concluido el objeto de la Cooperativa o imposibilidad sobreviniente.
4. Cuando no se cumpla el objeto para el que ha sido creada.
5. Cuando la cooperativa no hubiese iniciado actividades dentro del término fijado por la autorización.
6. Cuando el monto del Fondo Social haga imposible el normal cumplimiento de los objetivos de la Cooperativa.
7. Por inactividad de la Cooperativa durante dos años debidamente comprobada en los instrumentos internos y externos de la Cooperativa.
8. Por incumplimiento de los principios y valores del cooperativismo a ser determinado por la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFCCOP.
9. Por decisión judicial ejecutoriada una vez agotada la vía administrativa. Todos los casos del presente Artículo estarán sujetos al Decreto Supremo reglamentario de la presente Ley.

Artículo 72. (LIQUIDACIÓN).

- I. En los casos expresados en el artículo precedente, se procederá a la liquidación de la cooperativa. Para ello, la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFCCOP, deberá organizar la Comisión Liquidadora que estará integrada por un

representante de la citada entidad y un representante nombrado por la Asamblea General Extraordinaria.

II. La liquidación se efectuará de acuerdo a esta Ley, su Decreto Supremo reglamentario y el estatuto orgánico, así como la legislación aplicable en los diferentes sectores regulados.

Artículo 73. (COMISIÓN LIQUIDADORA). La Comisión Liquidadora tendrá las siguientes atribuciones:

1. Asumir la representación legal de la Cooperativa en liquidación.
2. Elaborar y ejecutar el Plan de Liquidación que será aprobado por la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFCCOP.
3. Cumplir las obligaciones de la Cooperativa en liquidación.
4. Pagar los gastos de liquidación con cargo a la Cooperativa en liquidación.
5. En caso de existir remanente, devolver a las asociadas y los asociados el valor nominal actualizado de los certificados de aportación. Cuando el activo sea insuficiente para garantizar la devolución íntegra, devolverá la cuota que proporcionalmente corresponda.
6. Desarrollar las acciones que sean necesarias para el mejor cumplimiento de su cometido.

Artículo 74. (DESTINO DEL REMANENTE). El remanente que resultare una vez pagadas las deudas y devuelto el valor nominal actualizado del certificado de aportación, se entregará a la Cooperativa de grado superior a la que estuviere asociada o en su defecto, a otra Cooperativa del lugar, con destino a educación y fomento cooperativo.

CAPÍTULO VIII

FUSIÓN, ABSORCIÓN Y ESCISIÓN

Artículo 75. (FUSIÓN, ABSORCIÓN Y ESCISIÓN). Procede la fusión, absorción o escisión, por decisión de dos tercios de las asociadas y los asociados presentes en su correspondiente Asamblea General Extraordinaria.

Artículo 76. (FUSIÓN). Procede cuando dos o más cooperativas se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva.

Artículo 77. (ABSORCIÓN). Procede cuando una cooperativa incorpora a otra u otras que se disuelven sin liquidarse. **Artículo 78. (ESCISIÓN).** Procede cuando una cooperativa destina una parte del Fondo Social para constituir una nueva Cooperativa.

Artículo 79. (PROHIBICIONES). Las cooperativas podrán fusionarse o absorberse dentro de un mismo sector, de conformidad al Decreto Supremo reglamentario. Se prohíbe la fusión o absorción con otro tipo de organizaciones económicas no cooperativas.

Artículo 80. (EMPRESAS MIXTAS Y EMPRENDIMIENTOS ASOCIATIVOS). La Cooperativa, como organización económica de la economía plural, podrá previa aprobación de la Asamblea General Extraordinaria, conformar empresas mixtas y emprendimientos asociativos, conforme los Artículos 306, 351 y 356 de la Constitución Política del Estado, la presente Ley, leyes sectoriales y Decreto Supremo reglamentario.

CAPÍTULO IX

DE LA INTEGRACIÓN

Artículo 81. (INTEGRACIÓN).

I. En el marco del derecho cooperativo, es la unión de cooperativas para formar parte del sistema cooperativo y ser representadas a nivel regional, departamental, nacional e internacional, con la finalidad de fortalecerse económica, técnica, tecnológica, financiera y administrativamente. Además de mejorar las condiciones sociales, deportivas y culturales de las cooperativas.

II. Toda ciudadana o ciudadano es libre de pertenecer o no a una Cooperativa. El registro que se conceda a una Cooperativa para funcionar, implicará su ingreso automático al nivel inmediato superior de acuerdo a lo establecido en la estructura orgánica del movimiento cooperativo señalada en la presente Ley.

III. La afiliación será al siguiente nivel superior existente cuando corresponda.

Artículo 82. (INTEGRACIÓN DE SERVICIOS). Con el propósito de potenciar las actividades de las federaciones se promoverá la integración de los servicios esenciales:

comercialización, mantenimiento, seguridad social, desarrollo tecnológico y otros, mediante la creación de centrales de servicios especializados.

Artículo 83. (DE LA COMPLEMENTARIEDAD). La Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFCCOP, en coordinación con la Confederación Nacional de Cooperativas - CONCOBOL y las federaciones sectoriales, cuando corresponda, promoverá las actividades complementarias dentro de un mismo sector económico.

SECCIÓN I

DE LAS CENTRALES DE COOPERATIVAS

Artículo 84. (CONFORMACIÓN).

I. Las cooperativas de un mismo territorio indígena originario campesino, municipio, región, provincia, departamento o en el ámbito nacional, podrán formar centrales de cooperativas, o centrales integrales de cooperativas, por decisión de sus Asambleas Generales Extraordinarias y con autorización de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFCCOP.

II. Para efectos de la presente Ley, las centrales decooperativas son formas de integración económica, sin fusión, de las cooperativas que la constituyen.

III. Las federaciones sectoriales nacionales, departamentales y regionales, promoverán en los sectores productivos la conformación de centrales de cooperativas, o centrales integrales de cooperativas, con el fin de impulsar la eficiencia productiva, la industrialización, la comercialización de sus productos, en sujeción al Decreto Supremo reglamentario de la presente Ley.

Artículo 85. (ATRIBUCIONES). Las centrales funcionarán como cooperativas y tendrán las atribuciones que a continuación se enumeran de manera indicativa y no limitativa:

1. Servir de nexo entre las cooperativas asociadas y representación ante las instituciones públicas y privadas.
2. Organizar fondos de crédito rotatorio.
3. Organizar y dotar servicios comunes para las cooperativas.
4. Producir o vender artículos para las cooperativas afiliadas.
5. Organizar servicios de almacenamiento y venta en común de bienes y servicios producidos.
6. Promover la producción, transformación, industrialización y comercialización con base en estudios de viabilidad económica y social.

SECCIÓN II

DE LAS FEDERACIONES DE COOPERATIVAS

Artículo 86. (FEDERACIONES). Las federaciones sectoriales podrán constituirse a nivel nacional, departamental o regional.

Artículo 87. (OBJETO DE LAS FEDERACIONES). Las federaciones tendrán por objeto:

1. La representación y defensa general de los intereses de las cooperativas asociadas.
2. La coordinación de las actividades de las cooperativas asociadas para la realización de los planes económico-productivos y sociales.
3. Brindar y facilitar a las cooperativas asociadas los servicios y producción de bienes que necesiten.
4. Participar como conciliador en los conflictos que surjan entre las cooperativas asociadas.
5. Estimular la creación de cooperativas y fomentar la educación, desarrollo y capacitación tecnológica, asistencia técnica y gestión cooperativa.
6. Promover actividades sociales, deportivas y culturales entre sus asociadas.
7. Implementar servicios comunes de previsión y asistencia social que requieran las cooperativas asociadas.
8. Implementar mecanismos de seguridad e higiene ocupacional.
9. Impulsar la producción, transformación, industrialización y comercialización con base en estudios de viabilidad económica y social, a favor de las cooperativas asociadas.
10. La promoción de formas de integración de cooperativas, cuando lo exijan las condiciones de la actividad económica o el interés común.
11. Otros emergentes de las necesidades.

Artículo 88. (FEDERACIÓN NACIONAL). Solamente, podrá existir una Federación Nacional por cada uno de los sectores de organización cooperativa.

Artículo 89. (FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL). En cada departamento del Estado Plurinacional de Bolivia, sólo podrá existir una Federación Sectorial Departamental.

Artículo 90. (FEDERACIONES REGIONALES). Las Federaciones Regionales se constituyen tomando en cuenta características comunes, económicas, distancia y ejercicio democrático.

Artículo 91. (VOTO PONDERADO). Se establece el voto ponderado y/proporcional en las cooperativas de segundo a quinto grado, de acuerdo con el número de las asociadas y los asociados de las cooperativas que representan, pudiendo establecerse mecanismos alternativos, siempre que sean equitativos y democráticos.

SECCIÓN III

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE BOLIVIA - CONCOBOL

Artículo 92. (CONFEDERACIÓN). La Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia - CONCOBOL, es única y a ella pertenecen todas las federaciones sectoriales de cooperativas, así como, aquellas cooperativas de primer a tercer grado que carezcan de una federación sectorial.

Artículo 93. (ESTRUCTURA). La Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia - CONCOBOL, estará constituida por los Consejos de Administración y Vigilancia, Tribunal de Honor, Centro de Conciliación y Arbitraje, y Comisiones Especiales; cuyos miembros serán elegidos democráticamente y se regirán por la presente Ley, el Decreto Supremo reglamentario y su estatuto orgánico.

Artículo 94. (COMISIONES ESPECIALES). La Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia - CONCOBOL, podrá contar con:

1. Comisión Técnica, encargada del estudio doctrinal cooperativo y asesoramiento técnico y jurídico.

2. Comisión de Conciliación, responsable de conocer y resolver amistosamente los conflictos suscitados entre las asociadas y los asociados de la Confederación.

3. Las comisiones que se consideren necesarias para el buen desempeño de sus funciones.

Artículo 95. (FACULTADES DE LA CONFEDERACIÓN). La Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia - CONCOBOL, tendrá las siguientes facultades:

1. Representar y defender a las federaciones, cooperativas de diferente grado así como a las asociadas y los asociados.

2. Representar al movimiento cooperativo nacional ante los organismos o convenciones cooperativas de carácter internacional.

3. Coordinar las actividades que deba desarrollar el sistema cooperativo de acuerdo con los planes económicos, sociales y productivos.

4. Participar en el diseño de las políticas públicas relacionadas con el sistema cooperativo.

5. Fomentar en todas las formas posibles el cooperativismo nacional.

6. Promover la enseñanza de la doctrina cooperativa en el sistema educativo boliviano.

7. Garantizar el funcionamiento de la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia - CONCOBOL.

8. Otras que emerjan para el mejor cumplimiento de sus fines.

Artículo 96. (PARTICIPACIÓN). Las cooperativas, en sus diferentes grados de integración, coadyuvarán en la formulación de planes de desarrollo, políticas públicas y estrategias del Estado Plurinacional, a nivel local, regional, departamental y nacional.

CAPÍTULO X

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DENTRO DEL ÁMBITO COOPERATIVO

Artículo 97. (RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS COOPERATIVOS). Las cooperativas podrán establecer en su estatuto orgánico, mecanismos alternativos de solución de conflictos dentro el ámbito cooperativo, en el marco de la Ley de Arbitraje y Conciliación, ante las instancias previstas en la presente Ley.

Artículo 98. (INSTANCIAS DE CONCILIACIÓN).

- I. La conciliación, como instancia previa, será adoptada por las asociadas y los asociados ante las Juntas de Conciliación establecidas en cada cooperativa, de acuerdo a su estatuto orgánico.

- II. En caso de existir conflictos entre cooperativas de segundo y tercer grado, la conciliación se efectuará ante las Juntas de Conciliación de las Federaciones.
- III. El Centro de Conciliación y Arbitraje de la Confederación Nacional de Cooperativas - CONCOBOL, resolverá los conflictos entre cooperativas de cuarto grado o aquellos no resueltos en los grados inferiores.

Artículo 99. (DEL ARBITRAJE COOPERATIVO).

- I. El Centro de Conciliación y Arbitraje de la Confederación Nacional de Cooperativas - CONCOBOL, resolverá los conflictos dentro el ámbito cooperativo.
- II. Su organización, composición y funcionamiento, será establecido mediante reglamento interno.

TÍTULO III

DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS COOPERATIVAS

CAPÍTULO I

DEL FOMENTO COOPERATIVO

Artículo 100. (FOMENTO ESTATAL). El Estado Plurinacional de Bolivia, establecerá políticas, normas y procedimientos adecuados para asegurar la organización de las cooperativas y su acceso a los programas y recursos financieros de fomento, necesarios para promover y fortalecer el desarrollo del sector cooperativo, particularmente las que se orienten a incrementar la producción y el empleo.

Artículo 101. (COMPRAS Y CONTRATACIONES ESTATALES).

- I. El Estado fomentará y garantizará la participación equitativa de las cooperativas en los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios estatales.
- II. Los bienes y servicios que el Estado produzca o provea podrán ser distribuidos a través de cooperativas.

Artículo 102. (FOMENTO A COOPERATIVAS ESPECIALMENTE

CONFORMADAS). Las cooperativas integradas por personas con capacidades diferentes, de adultos mayores o grupos minoritarios de extrema vulnerabilidad social, gozarán de un tratamiento preferente establecido en el Decreto Supremo reglamentario.

Artículo 103. (ACCESO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS). El Estado fomentará y promoverá la investigación, desarrollo e innovación tecnológica para el fortalecimiento de las actividades cooperativas.

Artículo 104. (PROTECCIÓN DEL ESTADO).

- I. La propiedad colectiva, licencias, derechos preconstituidos, autorizaciones y derechos adquiridos sobre áreas de trabajo, producción, servicios y contratos de las cooperativas son reconocidos, protegidos y garantizados por el Estado.
- II. Las trabajadoras y los trabajadores de empresas en procesos de quiebra, concurso o liquidación, cerradas o abandonadas de forma injustificada, podrán reactivarlas y reorganizarlas a través de cooperativas, las que contarán con el apoyo del Estado.
- III. Las cooperativas tendrán acceso equitativo a los bienes y servicios que el Estado produzca o provea.
- IV. Equidad en el acceso a licencias, permisos, contrataciones, asignaciones, incorporaciones tecnológicas a las cooperativas, eliminando restricciones y discriminaciones en el marco de la Constitución Política del Estado y las leyes.

Artículo 105. (FOMENTO A CREACIÓN DE COOPERATIVAS). Cuando el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas realicen proyectos de producción, servicios, obras públicas u otras de interés común, promoverán, apoyarán y fomentarán la conformación de cooperativas.

Artículo 106. (CONSEJO CONSULTIVO PERMANENTE PARA EL FOMENTO COOPERATIVO).

- I. Se crea el Consejo Consultivo Permanente para el Fomento Cooperativo, para el análisis, evaluación y elaboración de propuestas de políticas públicas de fortalecimiento y fomento del sector cooperativo y otras que el consejo considere necesarias.
- II. El Consejo Consultivo Permanente para el Fomento Cooperativo estará conformado por:
1. Ministra o Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

2. Ministra o Ministro de Planificación del Desarrollo.
3. Dos Ministras o Ministros de acuerdo a la actividad sectorial.
4. Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente de la Confederación de Cooperativas de Bolivia - CONCOBOL, más dos delegados sectoriales.

TÍTULO IV

DE LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO

CAPÍTULO I

DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, REGULACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN

Artículo 107. (DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, FOMENTO, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA). El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través del Viceministerio correspondiente, tendrá las siguientes atribuciones:

1. Promover el desarrollo social, económico y productivo del sector cooperativo.
2. Proponer y ejecutar políticas públicas de fomento, protección, fortalecimiento y promoción del sector cooperativo, sobre la base de las propuestas del Consejo Consultivo Permanente para el Fomento Cooperativo.
3. Establecer políticas especializadas y diferenciadas por sectores cooperativos.
4. Establecer programas y proyectos de fortalecimiento de las cooperativas, en los ámbitos técnico, administrativo, de seguridad industrial, salud ocupacional y gestión ambiental.
5. Establecer políticas específicas, para promover cooperativas integradas por grupos vulnerables.
6. Suscribir convenios con cooperativas e instituciones de fomento nacional e internacional, para el desarrollo y fortalecimiento del sistema cooperativo.
7. Promover la educación cooperativa en el sistema educativo.
8. Capacitar y asesorar técnica y administrativamente en el ámbito cooperativo.
9. Fomentar el desarrollo de servicios técnicos, para apoyar a las cooperativas.
10. Coordinar la asistencia técnica al sistema cooperativo que prestan los organismos del Estado, las instituciones de derecho público, las agencias internacionales o regionales o las personas de derecho privado.

Artículo 108. (DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS).

I. Se crea la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFCCOOP, institución pública técnica y operativa, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independencia administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, conforme a Decreto Supremo reglamentario.

II. La Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, tiene las siguientes atribuciones:

1. Cumplir y hacer cumplir la presente Ley, Decreto Supremo reglamentario, así como las normas conexas y complementarias.
2. Velar el cumplimiento de los principios y valores cooperativos.
3. Regular, fiscalizar y supervisar la gestión cooperativa en el marco de la presente Ley y Decreto Supremo reglamentario.
4. Supervisar la reorganización, escisión, fusión e integración cooperativa.
5. Fiscalizar la disolución y liquidación de las cooperativas.
6. Disponer acciones de intervención en los casos previstos por Ley.
7. Imponer y ejecutar sanciones a las cooperativas de acuerdo a la presente Ley y Decreto Supremo reglamentario.
8. Emitir resoluciones regulatorias y particulares.
9. Contribuir a la resolución de conflictos entre cooperativas así como entre sus asociados.
10. Administrar el Registro Estatal de Cooperativas.
11. Homologar los estatutos orgánicos y sus modificaciones.
12. Otorgar la personalidad jurídica a las cooperativas.
13. Revocar la personalidad jurídica de las cooperativas y cancelar su registro, de acuerdo a lo estipulado en esta Ley y su Decreto Supremo reglamentario.
14. Inscripción en el Registro Estatal de Cooperativas, la renovación de cada gestión de los Consejos de Administración, de Vigilancia, comités y/o comisiones elegidas en asamblea general; así como nuevas admisiones y exclusiones de las asociadas y los asociados de cooperativas, de acuerdo al Decreto Supremo reglamentario.
15. Registrar las memorias anuales y estados financieros, sin fines tributarios. Cuando corresponda serán estados financieros auditados de acuerdo al Decreto Supremo reglamentario.
16. Otras funciones y atribuciones que las disposiciones legales le confieran.

Artículo 109. (FINANCIAMIENTO). Son ingresos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFCOOP, conforme a reglamentación, los siguientes:

1. Tasa de Regulación.
2. Ingresos propios por la prestación de servicios.
3. Recursos del Tesoro General del Estado.
4. Donaciones y créditos nacionales o extranjeros.
5. Otros determinados por norma expresa.

Artículo 110. (INTERVENCIÓN).

I. La intervención es un procedimiento administrativo que tiene como objeto regularizar el funcionamiento de una Cooperativa, cuando se presenten las siguientes causales:

1. Evidencia de ingobernabilidad de la Cooperativa, agotadas las instancias internas del movimiento cooperativo, conforme a Decreto Supremo reglamentario.
2. Cuando la situación económico-financiera de la Cooperativa ponga en riesgo la continuidad de su funcionamiento.

II. En los casos en que exista una regulación sectorial específica de intervención, ésta se aplicará preferentemente.

III. La intervención de una cooperativa se efectuará por la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFCOOP, previo informe técnico y legal, la que será dispuesta a través de una resolución administrativa. La interposición de recursos en contra de la resolución administrativa de intervención, no impedirá que la misma sea efectuada.

IV. El interventor tiene la obligación de convocar a Asamblea General para garantizar la continuidad de la Cooperativa en un plazo no mayor a tres meses, prorrogable por un periodo similar, previa justificación ante la Asamblea General.

Artículo 111. (AUTORIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SECTORIAL). El Órgano Ejecutivo adecuará las normativas de regulación, supervisión y fiscalización de las entidades de la autoridad de fiscalización de las actividades cooperativas en los diferentes sectores, considerando su naturaleza sin fines de lucro y el carácter solidario de sus actividades.

CAPÍTULO II

SANCIONES

Artículo 112. (SANCIONES).

I. La contravención a las disposiciones de la presente Ley, su Decreto Supremo reglamentario, resoluciones regulatorias y administrativas, será pasible a la imposición de sanciones.

II. La clasificación de la infracción, su tipología y el procedimiento de imposición de la sanción, serán establecidos en el Decreto Supremo reglamentario de la presente Ley.

III. El régimen de infracciones y sanciones de la actividad sectorial, se rige por la normativa especial del sector.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. Las cooperativas que se encuentren actualmente registradas y en funcionamiento, se adecuarán a las disposiciones de esta Ley en el plazo de dos (2) años a partir de la aprobación del Decreto Supremo reglamentario; caso contrario, quedarán canceladas las autorizaciones no ratificadas y se ordenará la disolución, liquidación y extinción de tales cooperativas.

SEGUNDA. La reglamentación a la presente Ley deberá ser efectuada por el Órgano Ejecutivo en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días a partir de su publicación.

TERCERA. La legislación tributaria deberá tomar en cuenta la naturaleza de las cooperativas incorporando las categorías económicas propias del cooperativismo.

DISPOSICIÓN ABROGATORIA ÚNICA. Queda abrogada la Ley General de Sociedades Cooperativas, aprobada por Decreto Ley N° 5035 de 13 de septiembre de 1958; el Decreto Ley N° 12008 de 29 de noviembre de 1974, de creación del Instituto Nacional de Cooperativas –INALCO; el Decreto Supremo N° 12650 de 26 de junio de 1975, que aprueba el Estatuto Orgánico del INALCO; además se abrogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los diez días del mes de abril del año dos mil trece. Sen. Lilly Gabriela Montaña Viaña Dip. Lucio Marca Mamani

PRESIDENTA PRESIDENTE EN EJERCICIO
CÁMARA DE SENADORES CÁMARA DE DIPUTADOS
SENADOR SECRETARIO SENADORA SECRETARIA
DIPUTADO SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO

4.7. BRASIL

LEI Nº 5.764, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1971

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

Da Política Nacional de Cooperativismo

Art. 1º Compreende-se como Política Nacional de Cooperativismo a atividade decorrente das iniciativas ligadas ao sistema cooperativo, originárias de setor público ou privado, isoladas ou coordenadas entre si, desde que reconhecido seu interesse público.

Art. 2º As atribuições do Governo Federal na coordenação e no estímulo às atividades de cooperativismo no território nacional serão exercidas na forma desta Lei e das normas que surgirem em sua decorrência.

Parágrafo único. A ação do Poder Público se exercerá, principalmente, mediante prestação de assistência técnica e de incentivos financeiros e creditórios especiais, necessários à criação, desenvolvimento e integração das entidades cooperativas.

CAPÍTULO II

Das Sociedades Cooperativas

Art. 3º Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.

Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características:

I - adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade técnica de prestação de serviços;

II - variabilidade do capital social representado por quotas-partes;

III - limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado, facultado, porém, o estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se assim for mais adequado para o cumprimento dos objetivos sociais;

IV - inaccessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade;

V - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações e confederações de cooperativas, com exceção das que exerçam atividade de crédito, optar pelo critério da proporcionalidade;

VI - quorum para o funcionamento e deliberação da Assembléia Geral baseado no número de associados e não no capital;

VII - retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às operações realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da Assembléia Geral;

VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistência Técnica Educacional e Social;

IX - neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social;

X - prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa;

XI - área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, controle, operações e prestação de serviços.

CAPÍTULO III

Do Objetivo e Classificação das Sociedades Cooperativas

Art. 5º As sociedades cooperativas poderão adotar por objeto qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, assegurando-se-lhes o direito exclusivo e exigindo-se-lhes a obrigação do uso da expressão "cooperativa" em sua denominação.

Parágrafo único. É vedado às cooperativas o uso da expressão "Banco".

Art. 6º As sociedades cooperativas são consideradas:

I - singulares, as constituídas pelo número mínimo de 20 (vinte) pessoas físicas, sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas ou, ainda, aquelas sem fins lucrativos;

II - cooperativas centrais ou federações de cooperativas, as constituídas de, no mínimo, 3 (três) singulares, podendo, excepcionalmente, admitir associados individuais;

III - confederações de cooperativas, as constituídas, pelo menos, de 3 (três) federações de cooperativas ou cooperativas centrais, da mesma ou de diferentes modalidades.

§ 1º Os associados individuais das cooperativas centrais e federações de cooperativas serão inscritos no Livro de Matrícula da sociedade e classificados em grupos visando à transformação, no futuro, em cooperativas singulares que a elas se filiarão.

§ 2º A exceção estabelecida no item II, in fine, do caput deste artigo não se aplica às centrais e federações que exerçam atividades de crédito.

Art. 7º As cooperativas singulares se caracterizam pela prestação direta de serviços aos associados.

Art. 8º As cooperativas centrais e federações de cooperativas objetivam organizar, em comum e em maior escala, os serviços econômicos e assistenciais de interesse das filiadas, integrando e orientando suas atividades, bem como facilitando a utilização recíproca dos serviços.

Parágrafo único. Para a prestação de serviços de interesse comum, é permitida a constituição de cooperativas centrais, às quais se associem outras cooperativas de objetivo e finalidades diversas.

Art. 9º As confederações de cooperativas têm por objetivo orientar e coordenar as atividades das filiadas, nos casos em que o vulto dos empreendimentos transcender o âmbito de capacidade ou conveniência de atuação das centrais e federações.

Art. 10. As cooperativas se classificam também de acordo com o objeto ou pela natureza das atividades desenvolvidas por elas ou por seus associados.

§ 1º Além das modalidades de cooperativas já consagradas, caberá ao respectivo órgão controlador apreciar e caracterizar outras que se apresentem.

§ 2º Serão consideradas mistas as cooperativas que apresentarem mais de um objeto de atividades.

§ 3º Somente as cooperativas agrícolas mistas poderão criar e manter seção de crédito. (Revogado pela Lei Complementar nº 130, de 2009).

Art. 11. As sociedades cooperativas serão de responsabilidade limitada, quando a responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade se limitar ao valor do capital por ele subscrito.

Art. 12. As sociedades cooperativas serão de responsabilidade ilimitada, quando a responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade for pessoal, solidária e não tiver limite.

Art. 13. A responsabilidade do associado para com terceiros, como membro da sociedade, somente poderá ser invocada depois de judicialmente exigida da cooperativa.

CAPÍTULO IV

Da Constituição das Sociedades Cooperativas

Art. 14. A sociedade cooperativa constitui-se por deliberação da Assembléia Geral dos fundadores, constantes da respectiva ata ou por instrumento público.

Art. 15. O ato constitutivo, sob pena de nulidade, deverá declarar:

- I - a denominação da entidade, sede e objeto de funcionamento;
- II - o nome, nacionalidade, idade, estado civil, profissão e residência dos associados, fundadores que o assinaram, bem como o valor e número da quota-parte de cada um;
- III - aprovação do estatuto da sociedade;
- IV - o nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos associados eleitos para os órgãos de administração, fiscalização e outros.

Art. 16. O ato constitutivo da sociedade e os estatutos, quando não transcritos naquele, serão assinados pelos fundadores.

SEÇÃO I

Da Autorização de Funcionamento

Art. 17. A cooperativa constituída na forma da legislação vigente apresentará ao respectivo órgão executivo federal de controle, no Distrito Federal, Estados ou Territórios, ou ao órgão local para isso credenciado, dentro de 30 (trinta) dias da data da constituição, para fins de autorização, requerimento acompanhado de 4 (quatro) vias do ato constitutivo, estatuto e lista nominativa, além de outros documentos considerados necessários.

Art. 18. Verificada, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrada em seu protocolo, pelo respectivo órgão executivo federal de controle ou órgão local para isso credenciado, a existência de condições de funcionamento da cooperativa em constituição, bem como a regularidade da documentação apresentada, o órgão controlador devolverá, devidamente autenticadas, 2 (duas) vias à cooperativa, acompanhadas de documento dirigido à Junta Comercial do Estado, onde a entidade estiver sediada, comunicando a aprovação do ato constitutivo da requerente.

§ 1º Dentro desse prazo, o órgão controlador, quando julgar conveniente, no interesse do fortalecimento do sistema, poderá ouvir o Conselho Nacional de Cooperativismo, caso em que não se verificará a aprovação automática prevista no parágrafo seguinte.

§ 2º A falta de manifestação do órgão controlador no prazo a que se refere este artigo implicará a aprovação do ato constitutivo e o seu subsequente arquivamento na Junta Comercial respectiva.

§ 3º Se qualquer das condições citadas neste artigo não for atendida satisfatoriamente, o órgão ao qual compete conceder a autorização dará ciência ao requerente, indicando as exigências a serem cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, findos os quais, se não atendidas, o pedido será automaticamente arquivado.

§ 4º À parte é facultado interpor da decisão proferida pelo órgão controlador, nos Estados, Distrito Federal ou Territórios, recurso para a respectiva administração central, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contado da data do recebimento da comunicação e, em segunda e última instância, ao Conselho Nacional de Cooperativismo, também no prazo de 30 (trinta) dias, exceção feita às cooperativas de crédito, às seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas, e às cooperativas habitacionais, hipótese em que o recurso será apreciado pelo Conselho Monetário Nacional, no tocante às duas primeiras, e pelo Banco Nacional de Habitação em relação às últimas.

§ 5º Cumpridas as exigências, deverá o despacho do deferimento ou indeferimento da autorização ser exarado dentro de 60 (sessenta) dias, findos os quais, na ausência de decisão, o requerimento será considerado deferido. Quando a autorização depender de dois ou mais órgãos do Poder Público, cada um deles terá o prazo de 60 (sessenta) dias para se manifestar.

§ 6º Arquivados os documentos na Junta Comercial e feita a respectiva publicação, a cooperativa adquire personalidade jurídica, tornando-se apta a funcionar.

§ 7º A autorização caducará, independentemente de qualquer despacho, se a cooperativa não entrar em atividade dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data em que forem arquivados os documentos na Junta Comercial.

§ 8º Cancelada a autorização, o órgão de controle expedirá comunicação à respectiva Junta Comercial, que dará baixa nos documentos arquivados.

§ 9º A autorização para funcionamento das cooperativas de habitação, das de crédito e das seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas subordina-se ainda, à política dos respectivos órgãos normativos.

§ 10. A criação de seções de crédito nas cooperativas agrícolas mistas será submetida à prévia autorização do Banco Central do Brasil. (Revogado pela Lei Complementar nº 130, de 20090).

Art. 19. A cooperativa escolar não estará sujeita ao arquivamento dos documentos de constituição, bastando remetê-los ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma

Agrária, ou respectivo órgão local de controle, devidamente autenticados pelo diretor do estabelecimento de ensino ou a maior autoridade escolar do município, quando a cooperativa congregar associações de mais de um estabelecimento de ensino.

Art. 20. A reforma de estatutos obedecerá, no que couber, ao disposto nos artigos anteriores, observadas as prescrições dos órgãos normativos.

SEÇÃO II

Do Estatuto Social

Art. 21. O estatuto da cooperativa, além de atender ao disposto no artigo 4º, deverá indicar:

I - a denominação, sede, prazo de duração, área de ação, objeto da sociedade, fixação do exercício social e da data do levantamento do balanço geral;

II - os direitos e deveres dos associados, natureza de suas responsabilidades e as condições de admissão, demissão, eliminação e exclusão e as normas para sua representação nas assembléias gerais;

III - o capital mínimo, o valor da quota-parte, o mínimo de quotas-partes a ser subscrito pelo associado, o modo de integralização das quotas-partes, bem como as condições de sua retirada nos casos de demissão, eliminação ou de exclusão do associado;

IV - a forma de devolução das sobras registradas aos associados, ou do rateio das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura das despesas da sociedade;

V - o modo de administração e fiscalização, estabelecendo os respectivos órgãos, com definição de suas atribuições, poderes e funcionamento, a representação ativa e passiva da sociedade em juízo ou fora dele, o prazo do mandato, bem como o processo de substituição dos administradores e conselheiros fiscais;

VI - as formalidades de convocação das assembléias gerais e a maioria requerida para a sua instalação e validade de suas deliberações, vedado o direito de voto aos que nelas tiverem interesse particular sem privá-los da participação nos debates;

VII - os casos de dissolução voluntária da sociedade;

VIII - o modo e o processo de alienação ou oneração de bens imóveis da sociedade;

IX - o modo de reformar o estatuto;

X - o número mínimo de associados.

CAPÍTULO V

Dos Livros

Art. 22. A sociedade cooperativa deverá possuir os seguintes livros:

I - de Matrícula;

II - de Atas das Assembléias Gerais;

III - de Atas dos Órgãos de Administração;

IV - de Atas do Conselho Fiscal;

V - de presença dos Associados nas Assembléias Gerais;

VI - outros, fiscais e contábeis, obrigatórios.

Parágrafo único. É facultada a adoção de livros de folhas soltas ou fichas.

Art. 23. No Livro de Matrícula, os associados serão inscritos por ordem cronológica de admissão, dele constando:

I - o nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão e residência do associado;

II - a data de sua admissão e, quando for o caso, de sua demissão a pedido, eliminação ou exclusão;

III - a conta corrente das respectivas quotas-partes do capital social.

CAPÍTULO VI

Do Capital Social

Art. 24. O capital social será subdividido em quotas-partes, cujo valor unitário não poderá ser superior ao maior salário mínimo vigente no País.

§ 1º Nenhum associado poderá subscrever mais de 1/3 (um terço) do total das quotas-partes, salvo nas sociedades em que a subscrição deva ser diretamente proporcional ao movimento financeiro do cooperado ou ao quantitativo dos produtos a serem comercializados, beneficiados ou transformados, ou ainda, em relação à área cultivada ou ao número de plantas e animais em exploração.

§ 2º Não estão sujeitas ao limite estabelecido no parágrafo anterior as pessoas jurídicas de direito público que participem de cooperativas de eletrificação, irrigação e telecomunicações.

§ 3º É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às quotas-partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios, financeiros ou não, em favor de quaisquer associados ou terceiros excetuando-se os juros até o máximo de 12% (doze por cento) ao ano que incidirão sobre a parte integralizada.

Art. 25. Para a formação do capital social poder-se-á estipular que o pagamento das quotas-partes seja realizado mediante prestações periódicas, independentemente de chamada, por meio de contribuições ou outra forma estabelecida a critério dos respectivos órgãos executivos federais.

Art. 26. A transferência de quotas-partes será averbada no Livro de Matrícula, mediante termo que conterá as assinaturas do cedente, do cessionário e do diretor que o estatuto designar.

Art. 27. A integralização das quotas-partes e o aumento do capital social poderão ser feitos com bens avaliados previamente e após homologação em Assembléia Geral ou mediante retenção de determinada porcentagem do valor do movimento financeiro de cada associado.

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica às cooperativas de crédito, às agrícolas mistas com seção de crédito e às habitacionais.

§ 2º Nas sociedades cooperativas em que a subscrição de capital for diretamente proporcional ao movimento ou à expressão econômica de cada associado, o estatuto deverá prever sua revisão periódica para ajustamento às condições vigentes.

CAPÍTULO VII

Dos Fundos

Art. 28. As cooperativas são obrigadas a constituir:

I - Fundo de Reserva destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas atividades, constituído com 10% (dez por cento), pelo menos, das sobras líquidas do exercício;

II - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, destinado a prestação de assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa, constituído de 5% (cinco por cento), pelo menos, das sobras líquidas apuradas no exercício.

§ 1º Além dos previstos neste artigo, a Assembléia Geral poderá criar outros fundos, inclusive rotativos, com recursos destinados a fins específicos fixando o modo de formação, aplicação e liquidação.

§ 2º Os serviços a serem atendidos pelo Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social poderão ser executados mediante convênio com entidades públicas e privadas.

CAPÍTULO VIII

Dos Associados

Art. 29. O ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os serviços prestados pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais e preencham as condições estabelecidas no estatuto, ressalvado o disposto no artigo 4º, item I, desta Lei.

§ 1º A admissão dos associados poderá ser restrita, a critério do órgão normativo respectivo, às pessoas que exerçam determinada atividade ou profissão, ou estejam vinculadas a determinada entidade.

§ 2º Poderão ingressar nas cooperativas de pesca e nas constituídas por produtores rurais ou extrativistas, as pessoas jurídicas que pratiquem as mesmas atividades econômicas das pessoas físicas associadas.

§ 3º Nas cooperativas de eletrificação, irrigação e telecomunicações, poderão ingressar as pessoas jurídicas que se localizem na respectiva área de operações.

§ 4º Não poderão ingressar no quadro das cooperativas os agentes de comércio e empresários que operem no mesmo campo econômico da sociedade.

Art. 30. À exceção das cooperativas de crédito e das agrícolas mistas com seção de crédito, a admissão de associados, que se efetive mediante aprovação de seu pedido de ingresso pelo órgão de administração, complementa-se com a subscrição das quotas-partes de capital social e a sua assinatura no Livro de Matrícula.

Art. 31. O associado que aceitar e estabelecer relação empregatícia com a cooperativa, perde o direito de votar e ser votado, até que sejam aprovadas as contas do exercício em que ele deixou o emprego.

Art. 32. A demissão do associado será unicamente a seu pedido.

Art. 33. A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária, ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.

Art. 34. A diretoria da cooperativa tem o prazo de 30 (trinta) dias para comunicar ao interessado a sua eliminação.

Parágrafo único. Da eliminação cabe recurso, com efeito suspensivo à primeira Assembléia Geral.

Art. 35. A exclusão do associado será feita:

- I - por dissolução da pessoa jurídica;
- II - por morte da pessoa física;
- III - por incapacidade civil não suprida;
- IV - por deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na cooperativa.

Art. 36. A responsabilidade do associado perante terceiros, por compromissos da sociedade, perdura para os demitidos, eliminados ou excluídos até quando aprovadas as contas do exercício em que se deu o desligamento.

Parágrafo único. As obrigações dos associados falecidos, contraídas com a sociedade, e as oriundas de sua responsabilidade como associado em face de terceiros, passam aos herdeiros, prescrevendo, porém, após um ano contado do dia da abertura da sucessão, ressalvados os aspectos peculiares das cooperativas de eletrificação rural e habitacionais.

Art. 37. A cooperativa assegurará a igualdade de direitos dos associados sendo-lhe defeso:

- I - remunerar a quem agencie novos associados;
- II - cobrar prêmios ou ágio pela entrada de novos associados ainda a título de compensação das reservas;
- III - estabelecer restrições de qualquer espécie ao livre exercício dos direitos sociais.

CAPÍTULO IX

Dos Órgãos Sociais

SEÇÃO I

Das Assembléias Gerais

Art. 38. A Assembléia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

§ 1º As Assembléias Gerais serão convocadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias, em primeira convocação, mediante editais afixados em locais apropriados das dependências comumente mais freqüentadas pelos associados, publicação em jornal e comunicação aos associados por intermédio de circulares. Não havendo no horário estabelecido, quorum de instalação, as assembléias poderão ser realizadas em segunda ou terceira convocações desde que assim permitam os estatutos e conste do respectivo edital, quando então será observado o intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre a realização por uma ou outra convocação.

§ 2º A convocação será feita pelo Presidente, ou por qualquer dos órgãos de administração, pelo Conselho Fiscal, ou após solicitação não atendida, por 1/5 (um quinto) dos associados em pleno gozo dos seus direitos.

§ 3º As deliberações nas Assembléias Gerais serão tomadas por maioria de votos dos associados presentes com direito de votar.

Art. 39. É da competência das Assembléias Gerais, ordinárias ou extraordinárias, a destituição dos membros dos órgãos de administração ou fiscalização.

Parágrafo único. Ocorrendo destituição que possa afetar a regularidade da administração ou fiscalização da entidade, poderá a Assembléia designar administradores e conselheiros provisórios, até a posse dos novos, cuja eleição se efetuará no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Art. 40. Nas Assembléias Gerais o quorum de instalação será o seguinte:
I - 2/3 (dois terços) do número de associados, em primeira convocação;
II - metade mais 1 (um) dos associados em segunda convocação;
III - mínimo de 10 (dez) associados na terceira convocação ressalvado o caso de cooperativas centrais e federações e confederações de cooperativas, que se instalarão com qualquer número.

Art. 41. Nas Assembléias Gerais das cooperativas centrais, federações e confederações de cooperativas, a representação será feita por delegados indicados na forma dos seus estatutos e credenciados pela diretoria das respectivas filiadas.

Parágrafo único. Os grupos de associados individuais das cooperativas centrais e federações de cooperativas serão representados por 1 (um) delegado, escolhida entre seus membros e credenciado pela respectiva administração.

Art. 42. Nas cooperativas singulares, cada associado presente ou representado não terá direito a mais de 1 (um) voto, qualquer que seja o número de suas quotas-partes.

§ 1º Nas Assembléias Gerais das cooperativas singulares cujos associados se distribuam por área distante a mais de 50 km (cinquenta quilômetros) da sede, ou no caso de doença comprovada, será permitida a representação por meio de mandatário que tenha a qualidade de associado no gozo de seus direitos sociais e não exerça cargo eletivo na sociedade, vedado a cada mandatário dispor de mais de 3 (três) votos, compreendido o seu.

§ 2º Nas cooperativas singulares, cujo número de associados fôr superior a 1.000 (mil), poderá o mandatário que preencher as condições do parágrafo anterior representar até o máximo de 4 (quatro) associados, de conformidade com o critério que, em função da densidade do quadro associativo, fôr estabelecido no estatuto.

§ 3º Quando o número de associados nas cooperativas singulares exceder a 3.000 (três mil), pode o estatuto estabelecer que os mesmos sejam representados nas Assembléias Gerais por delegados que se revistam com as condições exigidas para o mandatário a que se refere o § 1º. O estatuto determinará o número de delegados, a época e a forma de sua escolha por grupos seccionais de associados de igual número e o tempo de duração da delegação.

§ 4º O delegado disporá de tantos votos quantos forem os associados componentes do grupo seccional que o eleger.

§ 5º Aos associados localizados em áreas afastadas, os quais, por insuficiência de número, não puderam ser organizados em grupo seccional próprio, é facultado comparecer pessoalmente às Assembléias para exercer o seu direito de voto.

§ 6º Os associados, integrantes de grupos seccionais, que não sejam delegados, poderão comparecer às Assembléias Gerais, privados, contudo, de voz e voto.

§ 7º As Assembléias Gerais compostas por delegados decidem sobre tôdas as matérias que, nos termos da lei ou dos estatutos, constituem objeto de decisão da assembléia geral dos associados.

Art. 42. Nas cooperativas singulares, cada associado presente não terá direito a mais de 1 (um) voto, qualquer que seja o número de suas quotas-partes. (Redação dada pela Lei nº 6.981, de 30/03/82)

§ 1º Não será permitida a representação por meio de mandatário. (Redação dada pela Lei nº 6.981, de 30/03/82)

§ 2º Quando o número de associados, nas cooperativas singulares exceder a 3.000 (três mil), pode o estatuto estabelecer que os mesmos sejam representados nas Assembléias Gerais por delegados que tenham a qualidade de associados no gozo de seus direitos sociais e não exerçam cargos eletivos na sociedade. (Redação dada pela Lei nº 6.981, de 30/03/82)

§ 3º O estatuto determinará o número de delegados, a época e forma de sua escolha por grupos seccionais de associados de igual número e o tempo de duração da delegação. (Redação dada pela Lei nº 6.981, de 30/03/82)

§ 4º Admitir-se-á, também, a delegação definida no parágrafo anterior nas cooperativas singulares cujo número de associados seja inferior a 3.000 (três mil), desde que haja filiados residindo a mais de 50 km (cinquenta quilômetros) da sede. (Redação dada pela Lei nº 6.981, de 30/03/82)

§ 5º Os associados, integrantes de grupos seccionais, que não sejam delegados, poderão comparecer às Assembléias Gerais, privados, contudo, de voz e voto. (Redação dada pela Lei nº 6.981, de 30/03/82)

§ 6º As Assembléias Gerais compostas por delegados decidem sobre todas as matérias que, nos termos da lei ou dos estatutos, constituem objeto de decisão da assembléia geral dos associados. (Redação dada pela Lei nº 6.981, de 30/03/82).

Art. 43. Prescreve em 4 (quatro) anos, a ação para anular as deliberações da Assembléia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com violação da lei ou do estatuto, contado o prazo da data em que a Assembléia foi realizada.

SEÇÃO II

Das Assembléias Gerais Ordinárias

Art. 44. A Assembléia Geral Ordinária, que se realizará anualmente nos 3 (três) primeiros meses após o término do exercício social, deliberará sobre os seguintes assuntos que deverão constar da ordem do dia:

I - prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

a) relatório da gestão;

b) balanço;

c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal.

II - destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios;

III - eleição dos componentes dos órgãos de administração, do Conselho Fiscal e de outros, quando for o caso;

IV - quando previsto, a fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração ou da Diretoria e do Conselho Fiscal;

V - quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os enumerados no artigo 46.

§ 1º Os membros dos órgãos de administração e fiscalização não poderão participar da votação das matérias referidas nos itens I e IV deste artigo.

§ 2º À exceção das cooperativas de crédito e das agrícolas mistas com seção de crédito, a aprovação do relatório, balanço e contas dos órgãos de administração, desonera seus componentes de responsabilidade, ressalvados os casos de erro, dolo, fraude ou simulação, bem como a infração da lei ou do estatuto.

SEÇÃO III

Das Assembléias Gerais Extraordinárias

Art. 45. A Assembléia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que necessário e poderá deliberar sobre qualquer assunto de interesse da sociedade, desde que mencionado no edital de convocação.

Art. 46. É da competência exclusiva da Assembléia Geral Extraordinária deliberar sobre os seguintes assuntos:

I - reforma do estatuto;

II - fusão, incorporação ou desmembramento;

III - mudança do objeto da sociedade;

IV - dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidantes;

V - contas do liquidante.

Parágrafo único. São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos associados presentes, para tornar válidas as deliberações de que trata este artigo.

SEÇÃO IV

Dos Órgãos de Administração

Art. 47. A sociedade será administrada por uma Diretoria ou Conselho de Administração, composto exclusivamente de associados eleitos pela Assembléia Geral, com mandato nunca superior a 4 (quatro) anos, sendo obrigatória a renovação de, no mínimo, 1/3 (um terço) do Conselho de Administração.

§ 1º O estatuto poderá criar outros órgãos necessários à administração.

§ 2º A posse dos administradores e conselheiros fiscais das cooperativas de crédito e das agrícolas mistas com seção de crédito e habitacionais fica sujeita à prévia homologação dos respectivos órgãos normativos.

Art. 48. Os órgãos de administração podem contratar gerentes técnicos ou comerciais, que não pertençam ao quadro de associados, fixando-lhes as atribuições e salários.

Art. 49. Ressalvada a legislação específica que rege as cooperativas de crédito, as seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas e as de habitação, os administradores eleitos ou contratados não serão pessoalmente responsáveis pelas

obrigações que contraírem em nome da sociedade, mas responderão solidariamente pelos prejuízos resultantes de seus atos, se procederem com culpa ou dolo.

Parágrafo único. A sociedade responderá pelos atos a que se refere a última parte deste artigo se os houver ratificado ou deles logrado proveito.

Art. 50. Os participantes de ato ou operação social em que se oculte a natureza da sociedade podem ser declarados pessoalmente responsáveis pelas obrigações em nome dela contraídas, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

Art. 51. São inelegíveis, além das pessoas impedidas por lei, os condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade.

Parágrafo único. Não podem compor uma mesma Diretoria ou Conselho de Administração, os parentes entre si até 2º (segundo) grau, em linha reta ou colateral.

Art. 52. O diretor ou associado que, em qualquer operação, tenha interesse oposto ao da sociedade, não pode participar das deliberações referentes a essa operação, cumprindo-lhe acusar o seu impedimento.

Art. 53. Os componentes da Administração e do Conselho fiscal, bem como os liquidantes, equiparam-se aos administradores das sociedades anônimas para efeito de responsabilidade criminal.

Art. 54. Sem prejuízo da ação que couber ao associado, a sociedade, por seus diretores, ou representada pelo associado escolhido em Assembléia Geral, terá direito de ação contra os administradores, para promover sua responsabilidade.

Art. 55. Os empregados de empresas que sejam eleitos diretores de sociedades cooperativas pelos mesmos criadas, gozarão das garantias asseguradas aos dirigentes sindicais pelo artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943).

SEÇÃO V

Do Conselho Fiscal

Art. 56. A administração da sociedade será fiscalizada, assídua e minuciosamente, por um Conselho Fiscal, constituído de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, todos associados eleitos anualmente pela Assembléia Geral, sendo permitida apenas a reeleição de 1/3 (um terço) dos seus componentes.

§ 1º Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além dos inelegíveis enumerados no artigo 51, os parentes dos diretores até o 2º (segundo) grau, em linha reta ou colateral, bem como os parentes entre si até esse grau.

§ 2º O associado não pode exercer cumulativamente cargos nos órgãos de administração e de fiscalização.

CAPÍTULO X

Fusão, Incorporação e Desmembramento

Art. 57. Pela fusão, duas ou mais cooperativas formam nova sociedade.

§ 1º Deliberada a fusão, cada cooperativa interessada indicará nomes para comporem comissão mista que procederá aos estudos necessários à constituição da nova sociedade, tais como o levantamento patrimonial, balanço geral, plano de distribuição de quotas-partes, destino dos fundos de reserva e outros e o projeto de estatuto.

§ 2º Aprovado o relatório da comissão mista e constituída a nova sociedade em Assembléia Geral conjunta os respectivos documentos serão arquivados, para aquisição de personalidade jurídica, na Junta Comercial competente, e duas vias dos mesmos, com a publicação do arquivamento, serão encaminhadas ao órgão executivo de controle ou ao órgão local credenciado.

§ 3º Exclui-se do disposto no parágrafo anterior a fusão que envolver cooperativas que exerçam atividades de crédito. Nesse caso, aprovado o relatório da comissão mista e constituída a nova sociedade em Assembléia Geral conjunta, a autorização para funcionar e o registro dependerão de prévia anuência do Banco Central do Brasil.

Art. 58. A fusão determina a extinção das sociedades que se unem para formar a nova sociedade que lhe sucederá nos direitos e obrigações.

Art. 59. Pela incorporação, uma sociedade cooperativa absorve o patrimônio, recebe os associados, assume as obrigações e se investe nos direitos de outra ou outras cooperativas.

Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, serão obedecidas as mesmas formalidades estabelecidas para a fusão, limitadas as avaliações ao patrimônio da ou das sociedades incorporandas.

Art. 60. As sociedades cooperativas poderão desmembrar-se em tantas quantas forem necessárias para atender aos interesses dos seus associados, podendo uma das novas entidades ser constituída como cooperativa central ou federação de cooperativas, cujas autorizações de funcionamento e os arquivamentos serão requeridos conforme o disposto nos artigos 17 e seguintes.

Art. 61. Deliberado o desmembramento, a Assembléia designará uma comissão para estudar as providências necessárias à efetivação da medida.

§ 1º O relatório apresentado pela comissão, acompanhado dos projetos de estatutos das novas cooperativas, será apreciado em nova Assembléia especialmente convocada para esse fim.

§ 2º O plano de desmembramento preverá o rateio, entre as novas cooperativas, do ativo e passivo da sociedade desmembrada.

§ 3º No rateio previsto no parágrafo anterior, atribuir-se-á a cada nova cooperativa parte do capital social da sociedade desmembrada em quota correspondente à participação dos associados que passam a integrá-la.

§ 4º Quando uma das cooperativas for constituída como cooperativa central ou federação de cooperativas, prever-se-á o montante das quotas-partes que as associadas terão no capital social.

Art. 62. Constituídas as sociedades e observado o disposto nos artigos 17 e seguintes, proceder-se-á às transferências contábeis e patrimoniais necessárias à concretização das medidas adotadas.

CAPÍTULO XI

Da Dissolução e Liquidação

Art. 63. As sociedades cooperativas se dissolvem de pleno direito:

I - quando assim deliberar a Assembléia Geral, desde que os associados, totalizando o número mínimo exigido por esta Lei, não se disponham a assegurar a sua continuidade;

II - pelo decurso do prazo de duração;

III - pela consecução dos objetivos predeterminados;

IV - devido à alteração de sua forma jurídica;

V - pela redução do número mínimo de associados ou do capital social mínimo se, até a Assembléia Geral subsequente, realizada em prazo não inferior a 6 (seis) meses, eles não forem restabelecidos;

VI - pelo cancelamento da autorização para funcionar;

VII - pela paralisação de suas atividades por mais de 120 (cento e vinte) dias.

Parágrafo único. A dissolução da sociedade importará no cancelamento da autorização para funcionar e do registro.

Art. 64. Quando a dissolução da sociedade não for promovida voluntariamente, nas hipóteses previstas no artigo anterior, a medida poderá ser tomada judicialmente a pedido de qualquer associado ou por iniciativa do órgão executivo federal.

Art. 65. Quando a dissolução for deliberada pela Assembléia Geral, esta nomeará um liquidante ou mais, e um Conselho Fiscal de 3 (três) membros para proceder à sua liquidação.

§ 1º O processo de liquidação só poderá ser iniciado após a audiência do respectivo órgão executivo federal.

§ 2º A Assembléia Geral, nos limites de suas atribuições, poderá, em qualquer época, destituir os liquidantes e os membros do Conselho Fiscal, designando os seus substitutos.

Art. 66. Em todos os atos e operações, os liquidantes deverão usar a denominação da cooperativa, seguida da expressão: "Em liquidação".

Art. 67. Os liquidantes terão todos os poderes normais de administração podendo praticar atos e operações necessários à realização do ativo e pagamento do passivo.

Art. 68. São obrigações dos liquidantes:

I - providenciar o arquivamento, na junta Comercial, da Ata da Assembléia Geral em que foi deliberada a liquidação;

II - comunicar à administração central do respectivo órgão executivo federal e ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A., a sua nomeação, fornecendo cópia da Ata da Assembléia Geral que decidiu a matéria;

III - arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade, onde quer que estejam;

IV - convocar os credores e devedores e promover o levantamento dos créditos e débitos da sociedade;

V - proceder nos 15 (quinze) dias seguintes ao de sua investidura e com a assistência, sempre que possível, dos administradores, ao levantamento do inventário e balanço geral do ativo e passivo;

VI - realizar o ativo social para saldar o passivo e reembolsar os associados de suas quotas-partes, destinando o remanescente, inclusive o dos fundos indivisíveis, ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A.;

VII - exigir dos associados a integralização das respectivas quotas-partes do capital social não realizadas, quando o ativo não bastar para solução do passivo;

VIII - fornecer aos credores a relação dos associados, se a sociedade for de responsabilidade ilimitada e se os recursos apurados forem insuficientes para o pagamento das dívidas;

IX - convocar a Assembléia Geral, cada 6 (seis) meses ou sempre que necessário, para apresentar relatório e balanço do estado da liquidação e prestar contas dos atos praticados durante o período anterior;

X - apresentar à Assembléia Geral, finda a liquidação, o respectivo relatório e as contas finais;

XI - averbar, no órgão competente, a Ata da Assembléia Geral que considerar encerrada a liquidação.

Art. 69. As obrigações e as responsabilidades dos liquidantes regem-se pelos preceitos peculiares aos dos administradores da sociedade liquidanda.

Art. 70. Sem autorização da Assembléia não poderá o liquidante gravar de ônus os móveis e imóveis, contrair empréstimos, salvo quando indispensáveis para o pagamento de obrigações inadivéis, nem prosseguir, embora para facilitar a liquidação, na atividade social.

Art. 71. Respeitados os direitos dos credores preferenciais, pagará o liquidante as dívidas sociais proporcionalmente e sem distinção entre vencidas ou não.

Art. 72. A Assembléia Geral poderá resolver, antes de ultimada a liquidação, mas depois de pagos os credores, que o liquidante faça rateios por antecipação da partilha, à medida em que se apurem os haveres sociais.

Art. 73. Solucionado o passivo, reembolsados os cooperados até o valor de suas quotas-partes e encaminhado o remanescente conforme o estatuído, convocará o liquidante Assembléia Geral para prestação final de contas.

Art. 74. Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação e a sociedade se extingue, devendo a ata da Assembléia ser arquivada na Junta Comercial e publicada.

Parágrafo único. O associado discordante terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da ata, para promover a ação que couber.

Art. 75. A liquidação extrajudicial das cooperativas poderá ser promovida por iniciativa do respectivo órgão executivo federal, que designará o liquidante, e será processada de acordo com a legislação específica e demais disposições regulamentares, desde que a sociedade deixe de oferecer condições operacionais, principalmente por constatada insolvência.

§ 1º A liquidação extrajudicial, tanto quanto possível, deverá ser precedida de intervenção na sociedade.

§ 2º Ao interventor, além dos poderes expressamente concedidos no ato de intervenção, são atribuídas funções, prerrogativas e obrigações dos órgãos de administração.

Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios.

Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.

Art. 77. Na realização do ativo da sociedade, o liquidante deverá:

I - mandar avaliar, por avaliadores judiciais ou de Instituições Financeiras Públicas, os bens de sociedade;

II - proceder à venda dos bens necessários ao pagamento do passivo da sociedade, observadas, no que couber, as normas constantes dos artigos 117 e 118 do Decreto-Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

Art. 78. A liquidação das cooperativas de crédito e da seção de crédito das cooperativas agrícolas mistas reger-se-á pelas normas próprias legais e regulamentares.

CAPÍTULO XII

Do Sistema Operacional das Cooperativas

SEÇÃO I

Do Ato Cooperativo

Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

SEÇÃO II

Das Distribuições de Despesas

Art. 80. As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços.

Parágrafo único. A cooperativa poderá, para melhor atender à equanimidade de cobertura das despesas da sociedade, estabelecer:

I - rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade entre todos os associados, quer tenham ou não, no ano, usufruído dos serviços por ela prestados, conforme definidas no estatuto;

II - rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que tenham usufruído dos serviços durante o ano, das sobras líquidas ou dos prejuízos verificados no balanço do exercício, excluídas as despesas gerais já atendidas na forma do item anterior.

Art. 81. A cooperativa que tiver adotado o critério de separar as despesas da sociedade e estabelecido o seu rateio na forma indicada no parágrafo único do artigo anterior deverá levantar separadamente as despesas gerais.

SEÇÃO III

Das Operações da Cooperativa

Art. 82. A cooperativa que se dedicar a vendas em comum poderá registrar-se como armazém geral e, nessa condição, expedir "Conhecimentos de Depósitos" e Warrants para os produtos de seus associados conservados em seus armazéns, próprios ou arrendados, sem prejuízo da emissão de outros títulos decorrentes de suas atividades normais, aplicando-se, no que couber, a legislação específica.

Art. 82. A cooperativa que se dedicar a vendas em comum poderá registrar-se como armazém geral, podendo também desenvolver as atividades previstas na Lei no 9.973, de 29 de maio de 2000, e nessa condição expedir Conhecimento de Depósito, Warrant, Certificado de Depósito Agropecuário - CDA e Warrant Agropecuário - WA para os produtos de seus associados conservados em seus armazéns, próprios ou arrendados, sem prejuízo da emissão de outros títulos decorrentes de suas atividades normais, aplicando-se, no que couber, a legislação específica. (Redação dada pela Lei nº 11.076, de 2004)

§ 1º Para efeito deste artigo, os armazéns da cooperativa se equiparam aos "Armazéns Gerais", com as prerrogativas e obrigações destes, ficando os componentes do Conselho de Administração ou Diretoria Executiva, emitente do título, responsáveis pessoal e solidariamente, pela boa guarda e conservação dos produtos vinculados, respondendo criminal e civilmente pelas declarações constantes do título, como também por qualquer ação ou omissão que acarrete o desvio, deterioração ou perda dos produtos.

§ 2º Observado o disposto no § 1º, as cooperativas poderão operar unidades de armazenagem, embalagem e frigorificação, bem como armazéns gerais alfandegários, nos termos do disposto no Capítulo IV da Lei n. 5.025, de 10 de junho de 1966.

Art. 83. A entrega da produção do associado à sua cooperativa significa a outorga a esta de plenos poderes para a sua livre disposição, inclusive para gravá-la e dá-la em garantia de operações de crédito realizadas pela sociedade, salvo se, tendo em vista os usos e costumes relativos à comercialização de determinados produtos, sendo de interesse do produtor, os estatutos dispuserem de outro modo.

Art. 84. As cooperativas de crédito rural e as seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas só poderão operar com associados, pessoas físicas, que de forma efetiva e predominante: (Revogado pela Lei Complementar nº 130, de 20090)

I - desenvolvam, na área de ação da cooperativa, atividades agrícolas, pecuárias ou extrativas;(Revogado pela Lei Complementar nº 130, de 20090)

II - se dediquem a operações de captura e transformação do pescado.(Revogado pela Lei Complementar nº 130, de 20090)

Parágrafo único. As operações de que trata este artigo só poderão ser praticadas com pessoas jurídicas, associadas, desde que exerçam exclusivamente atividades agrícolas, pecuárias ou extrativas na área de ação da cooperativa ou atividade de captura ou transformação do pescado.(Revogado pela Lei Complementar nº 130, de 20090)

Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de não associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais das cooperativas que as possuem.

Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a presente lei.

Parágrafo único. No caso das cooperativas de crédito e das seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas, o disposto neste artigo só se aplicará com base em regras a serem estabelecidas pelo órgão normativo. (Revogado pela Lei Complementar nº 130, de 20090).

Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados, mencionados nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo para incidência de tributos.

Art. 88. Mediante prévia e expressa autorização concedida pelo respectivo órgão executivo federal, consoante as normas e limites instituídos pelo Conselho Nacional de Cooperativismo, poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas públicas ou privadas, em caráter excepcional, para atendimento de objetivos acessórios ou complementares.

Parágrafo único. As inversões decorrentes dessa participação serão contabilizadas em títulos específicos e seus eventuais resultados positivos levados ao "Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social"

Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas para melhor atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou complementar. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.168-40, de 24 de agosto de 2001).

SEÇÃO IV

Dos Prejuízos

Art. 89. Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos, ressalvada a opção prevista no parágrafo único do artigo 80.

SEÇÃO V

Do Sistema Trabalhista

Art. 90. Qualquer que seja o tipo de cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados.

Art. 91. As cooperativas igualam-se às demais empresas em relação aos seus empregados para os fins da legislação trabalhista e previdenciária.

CAPÍTULO XIII

Da Fiscalização e Controle

Art. 92. A fiscalização e o controle das sociedades cooperativas, nos termos desta lei e dispositivos legais específicos, serão exercidos, de acordo com o objeto de funcionamento, da seguinte forma:

I - as de crédito e as seções de crédito das agrícolas mistas pelo Banco Central do Brasil;

II - as de habitação pelo Banco Nacional de Habitação;

III - as demais pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

§ 1º Mediante autorização do Conselho Nacional de Cooperativismo, os órgãos controladores federais, poderão solicitar, quando julgarem necessário, a colaboração de outros órgãos administrativos, na execução das atribuições previstas neste artigo.

§ 2º As sociedades cooperativas permitirão quaisquer verificações determinadas pelos respectivos órgãos de controle, prestando os esclarecimentos que lhes forem solicitados, além de serem obrigadas a remeter-lhes anualmente a relação dos associados admitidos, demitidos, eliminados e excluídos no período, cópias de atas, de balanços e dos relatórios do exercício social e parecer do Conselho Fiscal.

Art. 93. O Poder Público, por intermédio da administração central dos órgãos executivos federais competentes, por iniciativa própria ou solicitação da Assembléia Geral ou do Conselho Fiscal, intervirá nas cooperativas quando ocorrer um dos seguintes casos:

I - violação contumaz das disposições legais;

II - ameaça de insolvência em virtude de má administração da sociedade;

III - paralisação das atividades sociais por mais de 120 (cento e vinte) dias consecutivos;

IV - inobservância do artigo 56, § 2º.

Parágrafo único. Aplica-se, no que couber, às cooperativas habitacionais, o disposto neste artigo.

Art. 94. Observar-se-á, no processo de intervenção, a disposição constante do § 2º do artigo 75.

CAPÍTULO XIV

Do Conselho Nacional de Cooperativismo

Art. 95. A orientação geral da política cooperativista nacional caberá ao Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC, que passará a funcionar junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com plena autonomia administrativa e financeira, na forma do artigo 172 do Decreto-Lei n. 200, de 25 de fevereiro de 1967, sob a presidência do Ministro da Agricultura e composto de 8 (oito) membros indicados pelos seguintes representados:

I - Ministério do Planejamento e Coordenação Geral;

II - Ministério da Fazenda, por intermédio do Banco Central do Brasil;

III - Ministério do Interior, por intermédio do Banco Nacional da Habitação;

IV - Ministério da Agricultura, por intermédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, e do Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A.;

V - Organização das Cooperativas Brasileiras.

Parágrafo único. A entidade referida no inciso V deste artigo contará com 3 (três) elementos para fazer-se representar no Conselho.

Art. 96. O Conselho, que deverá reunir-se ordinariamente uma vez por mês, será presidido pelo Ministro da Agricultura, a quem caberá o voto de qualidade, sendo suas resoluções votadas por maioria simples, com a presença, no mínimo de 3 (três) representantes dos órgãos oficiais mencionados nos itens I a IV do artigo anterior.

Parágrafo único. Nos seus impedimentos eventuais, o substituto do Presidente será o Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

Art. 97. Ao Conselho Nacional de Cooperativismo compete:

I - editar atos normativos para a atividade cooperativista nacional;

II - baixar normas regulamentadoras, complementares e interpretativas, da legislação cooperativista;

III - organizar e manter atualizado o cadastro geral das cooperativas nacionais;

IV - decidir, em última instância, os recursos originários de decisões do respectivo órgão executivo federal;

V - apreciar os anteprojetos que objetivam a revisão da legislação cooperativista;

VI - estabelecer condições para o exercício de quaisquer cargos eletivos de administração ou fiscalização de cooperativas;

VII - definir as condições de funcionamento do empreendimento cooperativo, a que se refere o artigo 18;

VIII - votar o seu próprio regimento;

IX - autorizar, onde houver condições, a criação de Conselhos Regionais de Cooperativismo, definindo-lhes as atribuições;

X - decidir sobre a aplicação do Fundo Nacional de Cooperativismo, nos termos do artigo 102 desta Lei;

XI - estabelecer em ato normativo ou de caso a caso, conforme julgar necessário, o limite a ser observado nas operações com não associados a que se referem os artigos 85 e 86.

Parágrafo único. As atribuições do Conselho Nacional de Cooperativismo não se estendem às cooperativas de habitação, às de crédito e às seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas, no que forem regidas por legislação própria.

Art. 98. O Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC contará com uma Secretaria Executiva que se incumbirá de seus encargos administrativos, podendo seu Secretário Executivo requisitar funcionários de qualquer órgão da Administração Pública.

§ 1º O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Cooperativismo será o Diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, devendo o Departamento referido incumbir-se dos encargos administrativos do Conselho Nacional de Cooperativismo.

§ 2º Para os impedimentos eventuais do Secretário Executivo, este indicará à apreciação do Conselho seu substituto.

Art. 99. Compete ao Presidente do Conselho Nacional de Cooperativismo:

I - presidir as reuniões;

II - convocar as reuniões extraordinárias;

III - proferir o voto de qualidade.

Art. 100. Compete à Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Cooperativismo:

I - dar execução às resoluções do Conselho;

II - comunicar as decisões do Conselho ao respectivo órgão executivo federal;

III - manter relações com os órgãos executivos federais, bem assim com quaisquer outros órgãos públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros, que possam influir no aperfeiçoamento do cooperativismo;

IV - transmitir aos órgãos executivos federais e entidade superior do movimento cooperativista nacional todas as informações relacionadas com a doutrina e práticas cooperativistas de seu interesse;

V - organizar e manter atualizado o cadastro geral das cooperativas nacionais e expedir as respectivas certidões;

VI - apresentar ao Conselho, em tempo hábil, a proposta orçamentária do órgão, bem como o relatório anual de suas atividades;

VII - providenciar todos os meios que assegurem o regular funcionamento do Conselho;

VIII - executar quaisquer outras atividades necessárias ao pleno exercício das atribuições do Conselho.

Art. 101. O Ministério da Agricultura incluirá, em sua proposta orçamentária anual, os recursos financeiros solicitados pelo Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC, para custear seu funcionamento.

Parágrafo único. As contas do Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC, serão prestadas por intermédio do Ministério da Agricultura, observada a legislação específica que regula a matéria.

Art. 102. Fica mantido, junto ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A., o "Fundo Nacional de Cooperativismo", criado pelo Decreto-Lei n. 59, de 21 de novembro de 1966, destinado a prover recursos de apoio ao movimento cooperativista nacional.

§ 1º O Fundo de que trata este artigo será, suprido por:

I - dotação incluída no orçamento do Ministério da Agricultura para o fim específico de incentivos às atividades cooperativas;

II - juros e amortizações dos financiamentos realizados com seus recursos;

III - doações, legados e outras rendas eventuais;

IV - dotações consignadas pelo Fundo Federal Agropecuário e pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.

§ 2º Os recursos do Fundo, deduzido o necessário ao custeio de sua administração, serão aplicados pelo Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A., obrigatoriamente, em financiamento de atividades que interessem de maneira relevante o abastecimento das populações, a critério do Conselho Nacional de Cooperativismo.

§ 3º O Conselho Nacional de Cooperativismo poderá, por conta do Fundo, autorizar a concessão de estímulos ou auxílios para execução de atividades que, pela sua relevância sócio-econômica, concorram para o desenvolvimento do sistema cooperativista nacional.

CAPÍTULO XV

Dos Órgãos Governamentais

Art. 103. As cooperativas permanecerão subordinadas, na parte normativa, ao Conselho Nacional de Cooperativismo, com exceção das de crédito, das seções de crédito das agrícolas mistas e das de habitação, cujas normas continuarão a ser baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, relativamente às duas primeiras, e Banco Nacional de Habitação, com relação à última, observado o disposto no artigo 92 desta Lei.

Parágrafo único. Os órgãos executivos federais, visando à execução descentralizada de seus serviços, poderão delegar sua competência, total ou parcialmente, a órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como, excepcionalmente, a outros órgãos e entidades da administração federal.

Art. 104. Os órgãos executivos federais comunicarão todas as alterações havidas nas cooperativas sob a sua jurisdição ao Conselho Nacional de Cooperativismo, para fins de atualização do cadastro geral das cooperativas nacionais.

CAPÍTULO XVI

Da Representação do Sistema Cooperativista

Art. 105. A representação do sistema cooperativista nacional cabe à Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB, sociedade civil, com sede na Capital Federal, órgão técnico-consultivo do Governo, estruturada nos termos desta Lei, sem finalidade lucrativa, competindo-lhe precipuamente:

- a) manter neutralidade política e indiscriminação racial, religiosa e social;
- b) integrar todos os ramos das atividades cooperativistas;
- c) manter registro de todas as sociedades cooperativas que, para todos os efeitos, integram a Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB;
- d) manter serviços de assistência geral ao sistema cooperativista, seja quanto à estrutura social, seja quanto aos métodos operacionais e orientação jurídica, mediante pareceres e recomendações, sujeitas, quando for o caso, à aprovação do Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC;
- e) denunciar ao Conselho Nacional de Cooperativismo práticas nocivas ao desenvolvimento cooperativista;
- f) opinar nos processos que lhe sejam encaminhados pelo Conselho Nacional de Cooperativismo;
- g) dispor de setores consultivos especializados, de acordo com os ramos de cooperativismo;
- h) fixar a política da organização com base nas proposições emanadas de seus órgãos técnicos;
- i) exercer outras atividades inerentes à sua condição de órgão de representação e defesa do sistema cooperativista;
- j) manter relações de integração com as entidades congêneres do exterior e suas cooperativas.

§ 1º A Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB, será constituída de entidades, uma para cada Estado, Território e Distrito Federal, criadas com as mesmas características da organização nacional.

§ 2º As Assembléias Gerais do órgão central serão formadas pelos Representantes credenciados das filiadas, 1 (um) por entidade, admitindo-se proporcionalidade de voto.

§ 3º A proporcionalidade de voto, estabelecida no parágrafo anterior, ficará a critério da OCB, baseando-se no número de associados - pessoas físicas e as exceções previstas nesta Lei - que compõem o quadro das cooperativas filiadas.

§ 4º A composição da Diretoria da Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB será estabelecida em seus estatutos sociais.

§ 5º Para o exercício de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, as eleições se processarão por escrutínio secreto, permitida a reeleição para mais um mandato consecutivo.

Art. 106. A atual Organização das Cooperativas Brasileiras e as suas filiadas ficam investidas das atribuições e prerrogativas conferidas nesta Lei, devendo, no prazo de 1 (um) ano, promover a adaptação de seus estatutos e a transferência da sede nacional.

Art. 107. As cooperativas são obrigadas, para seu funcionamento, a registrar-se na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver, mediante apresentação dos estatutos sociais e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Por ocasião do registro, a cooperativa pagará 10% (dez por cento) do maior salário mínimo vigente, se a soma do respectivo capital integralizado e fundos não exceder de 250 (duzentos e cinquenta) salários mínimos, e 50% (cinquenta por cento) se aquele montante for superior.

Art. 108. Fica instituída, além do pagamento previsto no parágrafo único do artigo anterior, a Contribuição Cooperativista, que será recolhida anualmente pela cooperativa após o encerramento de seu exercício social, a favor da Organização das Cooperativas Brasileiras de que trata o artigo 105 desta Lei.

§ 1º A Contribuição Cooperativista constituir-se-á de importância correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do capital integralizado e fundos da sociedade cooperativa, no exercício social do ano anterior, sendo o respectivo montante distribuído, por metade, a suas filiadas, quando constituídas.

§ 2º No caso das cooperativas centrais ou federações, a Contribuição de que trata o parágrafo anterior será calculada sobre os fundos e reservas existentes.

§ 3º A Organização das Cooperativas Brasileiras poderá estabelecer um teto à Contribuição Cooperativista, com base em estudos elaborados pelo seu corpo técnico.

CAPÍTULO XVII

Dos Estímulos Creditícios

Art. 109. Caberá ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A., estimular e apoiar as cooperativas, mediante concessão de financiamentos necessários ao seu desenvolvimento.

§ 1º Poderá o Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A., receber depósitos das cooperativas de crédito e das seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas.

§ 2º Poderá o Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A., operar com pessoas físicas ou jurídicas, estranhas ao quadro social cooperativo, desde que haja benefício para as cooperativas e estas figurem na operação bancária.

§ 3º O Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A., manterá linhas de crédito específicas para as cooperativas, de acordo com o objeto e a natureza de suas atividades, a juros módicos e prazos adequados inclusive com sistema de garantias ajustado às peculiaridades das cooperativas a que se destinam.

§ 4º O Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A., manterá linha especial de crédito para financiamento de quotas-partes de capital.

Art. 110. Fica extinta a contribuição de que trata o artigo 13 do Decreto-Lei n. 60, de 21 de novembro de 1966, com a redação dada pelo Decreto-Lei n. 668, de 3 de julho de 1969.

CAPÍTULO XVIII

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta Lei.

Art. 112. O Balanço Geral e o Relatório do exercício social que as cooperativas deverão encaminhar anualmente aos órgãos de controle serão acompanhados, a juízo destes, de parecer emitido por um serviço independente de auditoria credenciado pela Organização das Cooperativas Brasileiras.

Parágrafo único. Em casos especiais, tendo em vista a sede da Cooperativa, o volume de suas operações e outras circunstâncias dignas de consideração, a exigência da apresentação do parecer pode ser dispensada.

Art. 113. Atendidas as deduções determinadas pela legislação específica, às sociedades cooperativas ficará assegurada primeira prioridade para o recebimento de seus créditos de pessoas jurídicas que efetuem descontos na folha de pagamento de seus empregados, associados de cooperativas.

Art. 114. Fica estabelecido o prazo de 36 (trinta e seis) meses para que as cooperativas atualmente registradas nos órgãos competentes reformulem os seus estatutos, no que for cabível, adaptando-os ao disposto na presente Lei.

Art. 115. As Cooperativas dos Estados, Territórios ou do Distrito Federal, enquanto não constituírem seus órgãos de representação, serão convocadas às Assembléias da OCB, como vogais, com 60 (sessenta) dias de antecedência, mediante editais publicados 3 (três) vezes em jornal de grande circulação local.

Art. 116. A presente Lei não altera o disposto nos sistemas próprios instituídos para as cooperativas de habitação e cooperativas de crédito, aplicando-se ainda, no que couber, o regime instituído para essas últimas às seções de crédito das agrícolas mistas.

Art. 117. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e especificamente o Decreto-Lei n. 59, de 21 de novembro de 1966, bem como o Decreto n. 60.597, de 19 de abril de 1967.

Brasília, 16 de dezembro de 1971; 150º da Independência e 83º da República.

EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
L. F. Cirne Lima
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 16.12.1971

4.8. CANADA

Current to October 20, 2010

Published by the Minister of Justice at the following address:
<http://laws-lois.justice.gc.ca>

Canada Cooperatives Act

S.C. 1998, c. 1 L.C. 1998, ch. 1

OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS

Subsections 31(1) and (2) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows:

Published consolidation is evidence

31. (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown.

Codifications

(2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the *Publication of Statutes Act*, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency.

Preamble

WHEREAS cooperatives in Canada carry on business in accordance with internationally recognized cooperative principles;
WHEREAS cooperatives work for the social and economic development of their communities through policies approved by their members;
WHEREAS the Government of Canada has determined that it is desirable to modernize the law governing those cooperatives;

PART 1

INTERPRETATION AND APPLICATION INTERPRETATION

Definitions

2. (1) The definitions in this subsection apply in this Act.

“affairs” means the relationship between a cooperative and its affiliates and their members, shareholders, directors and officers, but does not include the business carried on by those bodies corporate.

“affiliate” means an affiliated body corporate within the meaning of subsection (2).

“articles” means the original or restated articles of incorporation, articles of amendment, articles of amalgamation, articles of continuance, articles of reorganization, articles of arrangement, articles of dissolution, articles of revival and articles of correction, and includes any amendments to any of them.

“associate”, in respect of a relationship with a person, means

(a) a body corporate of which the person beneficially owns or controls, directly or indirectly, shares or securities currently convertible into shares carrying more than ten per cent of the voting rights under all circumstances or by reason of the occurrence of an event that has occurred and is continuing, or a currently exercisable option or right to purchase such shares or such convertible securities;

(b) a cooperative entity of which the person beneficially owns more than ten per cent of the voting rights that can be cast at a meeting of the cooperative entity;

(c) an unincorporated entity of which the person beneficially owns more than ten per cent of the ownership interests;

(d) a partner of the person acting on behalf of the partnership of which they are partners;

(e) a trust or an estate or succession in which the person has a substantial beneficial interest or serves as a trustee, administrator, executor or liquidator of a succession or in a similar capacity;

(f) a spouse of the person or an individual who is cohabiting with the person in a conjugal relationship, having so cohabited for a period of at least one year;

(g) a child of the person or of the spouse or individual referred to in paragraph (f); and

(h) a relative of the person or of the spouse or individual referred to in paragraph (f), if that relative has the same residence as the person.

“auditor” includes a firm of accountants.

“bearer”, in respect of a security, means the person who is in possession of a security that is payable to bearer or endorsed in blank.

“beneficial ownership” includes

(a) in Quebec, the rights of a beneficiary of a trust that owns property, and ownership of property through one or more administrators of the property of others, mandataries or other legal representatives; and

(b) in the rest of Canada, ownership of property through one or more trustees, legal representatives, agents or other intermediaries.

“body corporate” includes a cooperative, a cooperative entity, a company or any other body corporate wherever or however incorporated.

“call” means an option transferable by delivery, to demand delivery of a specified number or amount of securities at a fixed price within a specified time but does not include an option or right to acquire securities of the cooperative that granted the option or right to acquire.

“cooperative” means a body corporate that is incorporated under this Act and not discontinued under this Act.

“cooperative entity” means a body corporate that, by the law under which it is organized and operated, must be organized and operated on — and is organized and operated on — cooperative principles.

“court” means the court of first instance of superior jurisdiction of a province.

“director” means an individual occupying the position of director, by whatever name called, of a cooperative, and “board of directors” or “directors” refers to the directors as a body.

“distributing cooperative” means, subject to subsections 4(4) and (5), a distributing cooperative as defined in the regulations.

“entity” means a body corporate, a trust, a partnership, a fund or an unincorporated organization.

“federation” means a cooperative whose membership is composed substantially of other cooperative entities, federations or leagues of cooperative entities.

“firm of accountants” means a partnership whose partners and accountant employees are accountants engaged in the practice of accounting, or a body corporate that is incorporated by or under an Act of the legislature of a province and engaged in the practice of accounting.

“former Act cooperative” means a cooperative that was incorporated under the *Canada Cooperative Associations Act*.

“holder” means

(a) in respect of a security certificate, the person in possession of the certificate issued or endorsed to the person or to bearer or in blank;

(b) in respect of the ownership of a membership share, the person referred to in section 5; and

(c) in respect of the ownership of an investment share, the person referred to in section 6.

“incorporated”, when used with reference to a body corporate that is incorporated by or under an Act of Parliament or of the legislature of a province, includes a body corporate that is continued by or under any such Act.

“incorporator” means a person who signs articles of incorporation.

“individual” means a natural person.

“issuer”, in respect of a security, means the entity that issues the security.

“investment share” means a share in the capital of a cooperative that is not a membership share.

“meeting of a cooperative” means

(a) a meeting of members of a cooperative, or of a class of members of a cooperative, or

(b) a meeting of the holders of investment shares of a cooperative, or a class or series of investment shares, as the context permits.

“member loan” means a loan required by the cooperative from its members as a condition of membership or to continue membership in the cooperative, and, for the purpose of Parts 8, 16, 17, 18.1 and 19 and subsection 163(2), a member loan is deemed to be a membership share issued at par value.

“membership share” means a share described in section 118.

“Minister” means the member of the Queen’s Privy Council for Canada that is designated by the Governor in Council as the Minister for the purposes of this Act.

“officer” includes the chairperson of the board of directors, a vice-chairperson of the board of directors, the president, a vice-president, the secretary, an assistant secretary, the treasurer, an assistant treasurer and the general manager of a cooperative, and any other individual designated as an officer of the cooperative by bylaw or by resolution of the directors, or any other individual who performs functions for the cooperative similar to those normally performed by an individual occupying any such office.

“ordinary resolution” means a resolution passed by a majority — or any greater number set out in the articles or a unanimous agreement — of the votes cast by or on behalf of the persons who are entitled to vote in respect of the resolution.

“patronage return” means an amount that the cooperative allocates among and credits or pays to its members or to its member and non-member patrons based on the business done by them with or through the cooperative.

“person” means an individual or an entity, and includes a personal representative.

“personal representative” means a person who stands in place of and represents another person including, but not limited to, a trustee, an executor, an administrator, a receiver, an agent, a liquidator of a succession, a guardian, a tutor, a curator, a mandatary or an attorney.

“prescribed” means prescribed by regulation.

“proxy” means a completed and executed form of proxy by means of which a shareholder appoints a proxyholder to attend and act on the shareholder’s behalf at a meeting of the shareholders.

“put” means an option transferable by delivery, to deliver a specified number or amount of securities at a fixed price within a specified time.

“redeemable”, with respect to an investment share issued by a cooperative, means that the share is one

(a) that the cooperative may acquire or redeem on the demand of the cooperative; or

(b) that the cooperative is required by its articles to acquire or redeem at a specified time or on the demand of the holder.

“security” includes an investment share, a debt obligation of a cooperative and a certificate evidencing such a share or debt obligation and, for the purposes of section 173 and Parts 18.1 and 19, includes a membership share.

“security interest” means an interest in or charge on property of a cooperative to secure payment of a debt or the performance of an obligation of the cooperative.

“send” includes deliver.

“series”, in respect of investment shares, means a division of a class of those shares.

“share” means a membership share or an investment share.

“shareholder” means a person described in section 6.

“special resolution” means a resolution passed by not less than two thirds — or any greater number set out in the articles or a unanimous agreement — of the votes cast by or on behalf of the persons who are entitled to vote in respect of the resolution.

“unanimous agreement” means an agreement in writing among all members and all shareholders, if any, that contains a provision referred to in subsection 115(1). “*beneficial ownership*”

Affiliates

(2) For the purposes of this Act,

(a) a body corporate is affiliated with another body corporate if one of them is a subsidiary of the other, if both are subsidiaries of the same body corporate or if each of them is controlled by the same person; and

(b) if two bodies corporate are affiliated with the same body corporate at the same time, they are deemed to be affiliated with each other.

Minors

(3) For the purposes of this Act, the word “minor” has the same meaning as in the applicable provincial law and, in the absence of any such law, has the same meaning as the word “child” in the United Nations Convention on the Rights of the Child, adopted in the United Nations General Assembly on November 20, 1989.

Purposes of Act

3. (1) The purposes of this Act are

(a) to set out the law applicable to the business endeavours of persons who have associated themselves in a democratic manner to carry on a common purpose; and

(b) to advance the cause of uniformity of cooperative business law in Canada.

Carrying on business in more than one place

(2) No cooperative may be incorporated under this Act unless

(a) it will carry on its undertaking in two or more provinces; and

(b) it will have a fixed place of business in more than one province.

Application

(3) This Act applies to cooperatives incorporated under this Act that have not been discontinued.

Non-application of certain Acts

(4) No provision of the *Canada Business Corporations Act*, the *Canada Corporations Act*, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970, or the *Winding-up and Restructuring Act* applies to a cooperative.

Limitation on business that can be carried on

(5) No cooperative may carry on the business of

- (a) a bank;
- (b) a company to which the *Insurance Companies Act* applies;
- (c) a company to which the *Trust and Loan Companies Act* applies; or
- (d) an association to which the *Cooperative Credit Associations Act* applies.

Prohibition on granting degrees

(6) No cooperative may carry on business as a degree-granting educational institution unless expressly authorized to do so by a federal or provincial agent that by law has the power to confer degree-granting authority on an educational institution.

Control

4. (1) For the purposes of this Act,

- (a) a person controls a body corporate if securities of the body corporate to which are attached more than fifty per cent of the votes that may be cast to elect directors of the body corporate are beneficially owned by the person and the votes attached to those securities are sufficient, if exercised, to elect a majority of the directors of the body corporate; and
- (b) a person controls a cooperative entity if the person has the right to exercise more than fifty per cent of the votes that may be cast at an annual meeting or to appoint or elect a majority of the directors.

Holding body corporate

(2) A body corporate is the holding body corporate of another if that other body corporate is its subsidiary.

Subsidiary

(3) A body corporate is a subsidiary of another body corporate if

- (a) it is controlled by
 - (i) that other body corporate,
 - (ii) that other body corporate and one or more bodies corporate each of which is controlled by that other body corporate, or
 - (iii) two or more bodies corporate each of which is controlled by that other body corporate;
- or
- (b) it is a subsidiary of a body corporate that is a subsidiary of that other body corporate.

Exemptions — on application by cooperative

(4) On the application of a cooperative, the Director may determine that the cooperative is not or was not a distributing cooperative if the

Director is satisfied that the determination would not be prejudicial to the public interest.

(5) The Director may determine that a class of cooperatives are not or were not distributing cooperatives if the Director is satisfied that the determination would not be prejudicial to the public interest.

SHARE OWNERSHIP

Membership share ownership

5. A member is a holder of a membership share of a cooperative when, according to the members' register of the cooperative, the member is the owner of the membership share or is entitled to be entered in the members' register or like record of the cooperative as the owner of the membership share.

6. A person is a shareholder of a cooperative when, according to the securities register of the cooperative, the person is the owner of an investment share or is entitled to be entered in the securities register or like record of the cooperative as the owner of the investment share.

Cooperative basis

7. (1) For the purposes of this Act, a cooperative is organized and operated, and carries on business, on a cooperative basis if

- (a) membership in the cooperative is open, in a non-discriminatory manner, to persons who can use the services of the cooperative and who are willing and able to accept the responsibilities of membership;
- (b) each member or delegate has only one vote;
- (c) no member or delegate may vote by proxy;
- (d) interest on any member loan is limited to a maximum percentage fixed in the articles;
- (e) dividends on any membership share are limited to the maximum percentage fixed in the articles;
- (f) to the extent feasible, members provide the capital required by the cooperative, with the return paid on member capital not to exceed the maximum percentage specified in the articles;
- (g) surplus funds arising from the cooperative's operations are used
 - (i) to develop its business,
 - (ii) to provide or improve common services to members,
 - (iii) to provide for reserves or the payment of interest on member loans or dividends on membership shares and investment shares,
 - (iv) for community welfare or the propagation of cooperative enterprises, or
 - (v) as a distribution among its members as a patronage return; and
- (h) it educates its members, officers, employees and the public on the principles and techniques of cooperative enterprise.

Restrictions

(2) Paragraph (1)(a) is subject to any restrictions on the classes of persons to which membership may be available that may reasonably relate to any business restriction set out in the articles of the cooperative and to the reasonable commercial ability of the cooperative to provide services to prospective members, as long as the restrictions are consistent with applicable laws with respect to human rights.

Limites

Exception

- (3) Despite paragraph (1)(b),
 - (a) the articles of a federation may provide that the members or delegates of the federation have more than one vote;
 - (b) if, before the coming into force of this subsection, the articles of association or charter by-laws of a former Act cooperative provide that a member or delegate of the former Act cooperative has more than one vote, the articles filed under subsection 379(2) may contain the same provisions with respect to voting rights of members or delegates;
 - (c) any provision referred to in paragraph (b) is deemed to be contained in the articles of the cooperative until it complies with subsection 379(2); and
 - (d) the articles of a cooperative may provide that subject to the conditions stated in the articles, a cooperative entity may have more than one vote in a cooperative.

PART 2

INCORPORATION, STRUCTURE AND ORGANIZATION

Incorporators

8. (1) An application for incorporation of a cooperative may be made by a minimum of three persons, or by one or more cooperative entities, who intend to be members of the cooperative.

Persons who may not be incorporators

- (2) A person may not make an application under subsection (1) if the person is
 - (a) an individual who is less than eighteen years of age;
 - (b) an individual who is of unsound mind and has been so found by a court in Canada or elsewhere; or
 - (c) an individual or body corporate that has the status of bankrupt.

CAPITAL STRUCTURE

Capital structure

9. A cooperative may be incorporated with or without membership shares and with or without the power to issue investment shares.

APPLICATION FOR INCORPORATION DEMANDE DE CONSTITUTION

Application

10. An application for incorporation is made by sending the following to the Director:

- (a) articles of incorporation;
- (b) a notice of registered office in accordance with section 30;
- (c) a notice of directors in accordance with section 81;
- (d) a declaration signed by the incorporators that after incorporation the cooperative will be organized and operated and will carry on business on a cooperative basis;
- (e) if applicable, a declaration signed by the incorporators that after the incorporation the cooperative will be in compliance with either Part 20 or 21; and
- (f) any other information that the Director may require to make a decision under section 12.

ARTICLES OF INCORPORATION

Articles

11. (1) Articles of incorporation must be in the form fixed by the Director and contain the following particulars:

- (a) the name of the cooperative;
- (b) the place in Canada where its proposed registered office will be located;
- (c) the name and residence address of each of the incorporators;
- (d) the number of directors or the minimum and maximum number of directors;
- (e) any restriction on the businesses that the cooperative may carry on;
- (f) any restriction on the class of membership in the cooperative;
- (g) a statement that the cooperative will be organized and operated and will carry on business on a cooperative basis;
- (h) a statement that the cooperative will carry on its undertaking in two or more provinces and will have a fixed place of business in more than one province;
- (i) whether the cooperative is to be incorporated with or without membership share capital, and, if there is to be no membership share capital, a statement that the interest of each member as member is, subject to subsection 7(3), the same as that of every other member;
- (j) if there is to be membership share capital, whether the number of membership shares to be issued is unlimited or limited, and if limited, the maximum number of membership shares that may be issued, and, if the membership shares are to have a par value, their par value and, if they are not to have par value, whether the membership shares are to be issued, purchased, redeemed or otherwise acquired at a fixed price or at a price determined in accordance with a formula, and if so, the particulars of the formula;
- (k) any provision for a maximum rate of return that may be paid on member loans or membership shares;
- (l) whether there is to be investment share capital and, if so, the particulars of it;
- (m) any provisions for the distribution of the property of the cooperative on its dissolution and, in the case of a cooperative to which Part 20 or 21 applies, the provisions for that distribution of property in accordance with the applicable Part; and
- (n) any provision by which the members, other than by means of a unanimous agreement, restrict, in whole or in part, the powers of the directors to manage the business of the cooperative.

Additional provisions

(2) The articles may set out any provisions that could be set out in the by-laws of the cooperative and if they do, any reference in this Act to the by-laws of the cooperative is also a reference to those provisions of the articles.

Special majorities

(3) Subject to subsection (4), the articles or a unanimous agreement may require a greater number of votes of directors, members or shareholders than is required by this Act to effect an action.

Voting number

(4) Neither the articles nor a unanimous agreement may require, in order to remove a director or delegate, that more than a majority of the votes cast by or on behalf of the persons who are entitled to vote be so cast.

Signatures

(5) The articles must be signed by the incorporators.

INCORPORATION CONSTITUTION

Issuance of certificate of incorporation

12. (1) The Director must issue a certificate of incorporation for a cooperative if the Director is satisfied that

- (a) the articles are in accordance with section 11 and, if applicable, section 353 and subsection 359(2);

- (b) the cooperative will be organized and operated and will carry on business on a cooperative basis;
- (c) the cooperative will comply with Part 20 or 21, if applicable; and
- (d) a notice that is required to be given under subsection 30(2) or 81(1) indicates that the cooperative, if it came into existence, would be in compliance with the Act.

Reliance on certificate

(2) For the purposes of paragraphs (1)(b) and (c), the Director may rely on the articles and the declarations required by section 10.

Date of existence and effect

13. On the day set out in its certificate of incorporation, a cooperative comes into existence and the incorporators become members of the cooperative.

Adoption of bylaws

14. Without delay after the issuance of the certificate of incorporation, a meeting of the members must be held to make by-laws for the cooperative.

Adoption By-laws — mandatory provisions

15. (1) The by-laws of a cooperative must provide for

- (a) the qualifications of members and the procedures for acceptance of members;
- (b) the rights of joint members, if any;
- (c) the membership obligations of members, including any obligation to use the services of the cooperative and any fees to be paid by members;
- (d) if the cooperative has auxiliary members, the rights and obligations of auxiliary members and the conditions for their acceptance by the cooperative as auxiliary members, including
 - (i) the relationship an individual must have with the cooperative in order to be an auxiliary member, and
 - (ii) the services of the cooperative that may be available to auxiliary members;
- (e) whether the interest of a member in the cooperative may, subject to section 46, be transferred or assigned, and any conditions or restrictions that apply to such a transfer or assignment;
- (f) the selection, qualifications, term of office and removal of directors and members of committees of directors;
- (g) the distribution of any surplus earnings arising from the operations of the cooperative;
- (h) if the cooperative is to act as an agent or mandatary for its members, a definition of that relationship;
- (i) subject to sections 39 and 40 and Parts 20 and 21, the conditions on which membership is terminated, whether by withdrawal or by involuntary termination, if it may be terminated otherwise than as provided for in this Act, and the determination of the value and disposition of the member's interest in the cooperative on termination; and
- (j) if the cooperative wishes to permit members or shareholders to attend a meeting of the cooperative by means of a communication facility referred to in subsection 48(3), the ways in which votes must be held.

By-laws — other provisions

(2) The by-laws of a cooperative may provide for

- (a) the representation of members by delegates and, if so,
 - (i) the designation of the classes or regional groups of members, if any, who may be represented by delegates,
 - (ii) the procedure for altering classes or regional groups of members, if applicable, and
 - (iii) the powers, duties, selection, voting rights and procedures for the removal of delegates;
- (b) the division of members into classes or regional groups and, if so,
 - (i) the qualifications for membership in each class or regional group,
 - (ii) the conditions precedent to membership in each class or regional group,
 - (iii) the method, time and manner of withdrawing from a class or regional group or transferring membership from one class or regional group to another and any applicable conditions on a transfer, and
 - (iv) the conditions on which membership in a class or regional group ends;
- (c) the referral of disputes between a member and the cooperative to a process of dispute resolution; and
- (d) any other matter that the members consider necessary or desirable.

Binding effect of by-laws and articles

16. The articles and by-laws of a cooperative bind it and its members to the same extent as if they

- (a) had been signed by the cooperative and every member; and
- (b) contained undertakings by every member and the successors, assigns and personal representatives of every member to observe all the provisions of the articles and by-laws.

Copies

17. (1) Each member and shareholder may on request, not more than once in each calendar year, receive free of charge one copy of the articles, the by-laws and any unanimous agreement, and one copy of any amendments to the articles, the by-laws and any unanimous agreement, of the cooperative.

(2) The cooperative must provide each creditor, and, where the cooperative is a distributing cooperative, any other person, on payment of a reasonable fee, with a copy of the articles, the by-laws and any unanimous agreement of the cooperative.

COOPERATIVE BASIS

18. (1) Every cooperative must be organized and operated and must carry on business on a cooperative basis.

Complaint (2) A person may make an application to the court in accordance with section 329 if the person has a complaint that

- (a) a cooperative is not organized, operated or carrying on business on a cooperative basis; or
- (b) in the case of a cooperative to which Part 20 or 21 applies, the cooperative is not complying with the applicable Part.

PRE-INCORPORATION CONTRACTS

19. (1) Subject to this section, a person who enters into, or purports to enter into, a written contract in the name of or on behalf of a cooperative before it comes into existence is personally bound by the contract and is entitled to its benefits, unless the contract expressly provides otherwise.

Adoption by cooperative

(2) A cooperative may, within a reasonable time after it comes into existence, adopt a contract that was made in its name or on its behalf before it came into existence by any act or conduct that signifies the cooperative's intention to be bound by the contract.

Effect of adoption (3)

If a cooperative adopts a contract under this section,

- (a) the cooperative is bound by the contract and entitled to its benefits as of the date of the contract; and
- (b) the person who originally entered into the contract ceases to be bound by the contract or to be entitled to its benefits, subject to an order made under subsection (4).

Court order (4)

Whether or not a cooperative has adopted a contract, the court may, on application by a party to the contract,

- (a) make an order respecting the nature and extent of the obligations and liability under the contract of the cooperative and the person who entered into or purported to enter into the contract by or on behalf of the cooperative; and
- (b) make any other order that the court considers just in the circumstances.

Required name

20.

(1) A cooperative must have the word "cooperative", "co-operative", "coop", "co-op", "coop  rative", "united" or "pool", or another grammatical form of any of those words, as part of its name.

Use of abbreviation

(2) A cooperative that has the word "cooperative", "co-operative", "coop", "co-op" or "coop  rative", or another grammatical form of any of those words, as part of its name may use and be legally designated by any of those words or forms.

Business restriction

(3) If the business of a cooperative is restricted by its articles or by a resolution of its members to a specific business purpose, the cooperative must have as part of its name one or more words that suggest the nature of the restriction.

Alternate form

(4) The name of a cooperative may be set out in its articles in an English form, a French form, an English form and a French form, or a combined English and French form, so long as the combined form meets the prescribed criteria.

The cooperative may use and be legally designated by any such form.

Identification outside Canada

(6) A cooperative may set out in its articles its name in any language form and, if it does, it may use and be legally designated outside Canada by its name in that form.

Publication of name

(7) A cooperative must set out its name in legible characters in all contracts, invoices, negotiable instruments and orders for things or services made by or on behalf of the cooperative and in all documents filed with the Director under this Act.

Other name

21. Subject to subsection 20(3) and section 23, a cooperative may carry on business or identify itself by a name or style other than as set out in its articles.

Reservation of name

22. The Director may, on request, reserve for ninety days a name for an intended cooperative or for one that intends to change its name.

Prohibited names

23. A cooperative may not be incorporated with, have, carry on business under or identify itself by a name that is

- (a) prohibited, or deceptively misdescriptive, as may be prescribed; or
- (b) reserved for another body corporate.

Direction to change name

24. (1) The Director may direct a cooperative to change its name if the cooperative's name contravenes section 23 when the cooperative comes into existence or is continued.

Revocation of name

(2) If a cooperative has not complied with a direction under subsection (1) within sixty days after it is served with a written copy of the direction, the Director may issue a certificate of amendment revoking the name of the cooperative and assigning a new name to it.

Undertaking to change name

(3) If a cooperative acquires a name as a result of a person undertaking to dissolve or to change names, and the undertaking is not honoured, the Director may direct the cooperative to change its name in accordance with section 289, unless the undertaking is honoured within the period specified in subsection (2).

Amendment of articles when certificate of amendment issued

(4) The articles of the cooperative are deemed to be amended accordingly on the date shown in the certificate of amendment issued under subsection (2).

Notice of revocation

(5) On issuing a certificate of amendment under subsection (2), the Director must give notice of the change of name without delay in a publication generally available to the public.

Prohibition on use of name

25. Every entity, other than a cooperative incorporated under this Act or a body corporate incorporated by or under the authority of another Act of Parliament or an Act of the legislature of a province, is guilty of an offence if the entity uses or authorizes the use of the word "cooperative", "co-operative", "co-op", "coop", "coopérative" or "pool", or another grammatical form of any of those words, as part of its name or in any manner in connection with the conduct of its business so that the entity could reasonably be considered to be holding itself out as carrying on business as a cooperative entity.

PART 3

CAPACITY AND POWERS

Legal capacity

26.

- (1) Subject to this Act, a cooperative
- (a) has the capacity and the rights, powers and privileges of a natural person; and
 - (b) may carry on business throughout Canada.

By-laws not required to confer powers

- (2) It is not necessary for a cooperative to pass a by-law in order to confer any particular power on a cooperative or its directors.

Powers outside the jurisdiction

27. (1) Subject to this Act, a cooperative has the capacity to carry on its business, conduct its affairs and exercise its powers in any jurisdiction outside Canada to the extent and in the manner that the laws of that jurisdiction permit.

Business restriction

- (2) No cooperative and no subsidiary of a cooperative may carry on any business contrary to a restriction set out in the articles of the cooperative.

Validity of acts

- (3) No act of a cooperative, including a transfer of property, is invalid by reason only that the act is contrary to its articles or this Act.

Constructive notice

- (4) A member of a cooperative is deemed to have knowledge of the content of the articles and by-laws of the cooperative.

No constructive notice

- (5) Subject to subsection (4), no person is deemed to have knowledge of the content of a document by reason only that it is filed with the Director or is available for inspection at the cooperative.

Assertions

28.

- (1) No cooperative and no guarantor of an obligation of a cooperative may assert against a person dealing with the cooperative or against a person who acquired rights from the cooperative that
- (a) the cooperative's articles, by-laws or any unanimous agreement have not been complied with;
 - (b) the persons named in the most recent notice of directors filed with the Director are not the directors;
 - (c) the place named in the most recent notice of registered office filed with the Director is not the registered office;
 - (d) a person held out as a director, an officer, an agent or a mandatary of the cooperative has not been duly appointed or has no authority to exercise the powers and perform the duties that are customary in the business of the cooperative or usual for a director, officer, agent or mandatary;
 - (e) a document issued by a director, officer, agent or mandatary of the cooperative with actual or usual authority to issue it is not valid or genuine; or
 - (f) a sale, lease or exchange of all or substantially all of the property of the cooperative was not authorized.
- (g) [Repealed, 2001, c. 14, s. 145]
- Exception (2) Subsection (1) does not apply in respect of a person who has, or ought to have, knowledge of a situation described in that subsection by virtue of their relationship to the cooperative.

Exception No personal liability

29. The members and shareholders of a cooperative, by reason only of being members or shareholders, are not liable for any liability, act or default of the cooperative, except as provided in this Act.

PART 4

REGISTERED OFFICE AND RECORDS

REGISTERED OFFICE

Place of registered office

30. (1) A cooperative must maintain a registered office in the place set out in its articles.

Notice of registered office

(2) A notice of registered office in the form that the Director fixes must be sent to the Director together with any articles that designate or change the place of the registered office of the cooperative.

Change of address

(3) The directors may change the address of the registered office within the place specified in the articles.

Notice of change of address

(4) A cooperative must send to the Director, within fifteen days after any change of address of its registered office, a notice in the form that the Director fixes.

Record keeping

31. (1) A cooperative must prepare and maintain the following records at its registered office or at any other place in Canada designated by the directors:

- (a) the cooperative's articles and by-laws, including any amendments and a copy of any unanimous agreement;
- (b) the minutes of meetings of the members and shareholders;
- (c) copies of all notices of directors and notices of change of directors;
- (d) a list of its members, setting out their names and addresses, the number of any membership shares owned and the amount of any member loans;
- (e) a list of its shareholders, setting out their names and addresses and the number of investment shares owned;
- (f) a register of its directors, setting out the names and addresses of the individuals who are or who have been directors and the dates on which they became or ceased to be directors; and
- (g) if the cooperative issues securities in registered form, a securities register that complies with section 186.

Other records (2)

In addition to the records specified in subsection (1), a cooperative must prepare and maintain adequate

- (a) accounting records;
- (b) records containing minutes of meetings and resolutions of directors and any committee of directors; and
- (c) records sufficient for the purpose of calculating patronage returns, that show for each member particulars of the transactions between the cooperative and the member.

When records or registers kept outside Canada

(3) Despite subsection (1), but subject to the *Income Tax Act*, the *Excise Tax Act*, the *Customs Act* and any other Act administered by the Minister of National Revenue, a cooperative may keep all or any of its records mentioned in paragraphs (1)(a), (b), (c), (f) and (g) and (2)(a) and (b) at a place outside Canada, if

- (a) the records are available for inspection, by means of a computer terminal or other technology, during regular office hours at the registered office or another office in Canada designated by the directors; and
- (b) the cooperative provides the technical assistance to facilitate an inspection referred to in paragraph (a).

Retention of accounting records

(4) Subject to any other Act of Parliament and to any Act of the legislature of a province that provides for a longer retention period, a cooperative must retain the accounting records referred to in paragraph (2)(a) for a period of six years after the end of the financial year to which they relate.

Records of continued cooperatives

(5) For the purposes of paragraph (1)(b) and subsections (2) to (4), if a body corporate is continued under this Act, "records" includes similar records required by law to be maintained by the body corporate before it was so continued.

Form of records

32. (1) Any register or record required by this Act must be prepared and maintained in a form that is capable of reproducing any required information in intelligible written form within a reasonable time, including

- (a) a bound or loose-leaf form;
- (b) a photographic form;

- (c) a system of mechanical or electronic data processing; or
- (d) any other information storage device.

Precautions

- (2) A cooperative and its agents and mandataries must take reasonable precautions respecting the registers and records required by this Act to
- (a) prevent their loss or destruction;
 - (b) prevent the falsification of entries in them; and
 - (c) facilitate the detection and correction of inaccuracies in them.

Records open to directors' inspection

- (3) The records described in section 31, other than those described in paragraph 31(2)(c), must be open for inspection by the directors at any reasonable time.

Inspection and copying of records by members, creditors and shareholders

- (4) Members, creditors and shareholders of the cooperative, their personal representatives and the Director may examine the records referred to in paragraphs 31(1)(a), (b), (c) (f) and (g) during the usual business hours of the cooperative and may take extracts from the records, free of charge, or have copies of them made after payment of a reasonable fee.

LISTS

Lists

33.

- (1) Members, shareholders and creditors of a cooperative and their personal representatives and, where the cooperative is a distributing cooperative, any other person, may request that the cooperative provide them with a list of members or shareholders, no later than ten days after the cooperative receives the affidavit referred to in subsection (2) and after payment of a reasonable fee.

Affidavit

- (2) A request under subsection (1) must be accompanied by an affidavit containing
- (a) the name and address of the applicant; and
 - (b) an undertaking that the list of members or shareholders will not be used except as permitted by subsection (5).

Request by Director

- (3) The Director may request that the cooperative provide him or her with a list of members or shareholders, no later than ten days after the cooperative receives the request and after payment of a reasonable fee.

Contents of list

- (4) The list of members or shareholders provided under subsection (1) or (3) must set out in alphabetical order the names and addresses of the members or shareholders of the cooperative as of a date not more than ten days before the receipt of the affidavit referred to in subsection (2) or the request referred to in subsection (3).

Permitted uses of list

- (5) A list obtained under subsection (1) must not be used by any person except in connection with
- (a) an effort to influence voting at a meeting of the cooperative; and
 - (b) any other matter relating to the affairs of the cooperative.

Non-inclusion of name on request

- (6) A member or shareholder may advise the cooperative in writing that their name is not to be included in a list prepared by the cooperative further to a request under subsection (1), in which case the cooperative must not include that name in the list but must mention on the list that the list is incomplete.

Corporate seal

34. (1) A cooperative may but need not adopt a corporate seal and may change a corporate seal that is adopted.

Validity of unsealed documents

- (2) A document executed on behalf of a cooperative is not invalid merely because a corporate seal is not affixed to it.

PART 5

MEMBERSHIP

CONDITIONS FOR MEMBERSHIP

By-laws govern

35. Subject to this Act and any provision in the articles, membership in a cooperative is governed by its by-laws.

Application for membership

36. (1) No person may be admitted to membership in a cooperative until

- (a) the person has applied for membership in writing;
- (b) the application has been approved by the directors; and
- (c) the person has complied with the membership provisions required by the by-laws, including subscribing for any minimum number of membership shares, paying any minimum amount on account of the subscription price of the shares or paying any minimum amount on account of a member loan.

Effective date of membership

(2) If all the conditions set out in subsection (1) have been met within six months after the date on which the cooperative receives the application for membership, the directors may make the admission of the member into membership effective as of the date of the application or as of any date after that date but before the end of the six months.

Right to vote

37. (1) Subject to subsection (2) and subsection 7(3), a member has one vote on all matters to be decided by the members.

Delegates

(2) If the by-laws provide that the voting rights of a member are vested in one or more delegates to be elected or appointed by the members, the delegates so elected or appointed may exercise all or any of those rights.

When delegation permitted by bylaws

(3) When in this Act reference is made to a meeting of members and the cooperative has a by-law providing for the appointment of delegates, a reference in this Act to a meeting of members is to be construed as a reference to a meeting of delegates.

Members under eighteen years of age

38. (1) Subject to the by-laws, a person less than eighteen years of age may be admitted to membership in a cooperative and may vote at meetings of the cooperative.

Minors

(2) The articles and by-laws of a cooperative, and any unanimous agreement, are binding on a member who is less than eighteen years of age.

WITHDRAWAL FROM MEMBERSHIP

Withdrawal of membership

39. (1) Unless the by-laws provide otherwise, this section applies to the voluntary withdrawal of a member from membership in a cooperative.

Written notice

(2) A member may withdraw from membership in a cooperative by written notice to the cooperative. Any such withdrawal is effective on the later of the date stated in the notice and the date on which the cooperative receives the notice.

Redemption of membership shares and repayment of amounts owing on withdrawal

(3) Subject to section 149, the cooperative must, no later than one year after the effective date of a notice of withdrawal, redeem all membership shares held by the withdrawing member at the redemption price determined in accordance with section 146 and repay to the member all member loans, all other amounts held to the member's credit and all amounts outstanding on loans made to the cooperative by the member, together with any interest accrued on those amounts up to the date of the payment.

Redemption and repayment more than one year after withdrawal

(4) Despite subsection (3), if the directors determine that the redemption of membership shares, or the repayment of membership loans, of a withdrawing member would adversely affect the financial well-being of the cooperative, the directors may direct that the

redemption and repayment referred to in subsection (3) take place after the end of the one year period.

Withdrawal not to have certain effects

(5) Unless the directors determine otherwise,
(a) the withdrawal of a member from the cooperative does not release the member from any debt or obligation to the cooperative or contract with the cooperative; and
(b) the cooperative need not, despite subsection (3), repay to the member amounts outstanding on loans made to the cooperative that have a fixed maturity date until that date has arrived.

TERMINATION OF MEMBERSHIP

Termination of membership by directors

40. (1) This section sets out the rights and procedures that apply to termination of membership.

The by-laws of a cooperative may derogate from this section, but only in respect of the manner in which the membership of members may be terminated.

Exclusion Special resolution of directors

(2) The directors may by special resolution order the termination of the membership of a member but, if the cooperative is in breach of section 149 — or if making the payment referred to in subsection (7) would put the cooperative in breach of section 149 — the termination is not effective until the cooperative is no longer in breach.

Written notice

(3) Not more than ten days after the date on which a special resolution is made, the secretary of the cooperative must give written notice to the member of the termination and the reasons for it. Subject to subsections (4) and (5), the effective date of the termination is the later of the date specified in the written notice and (3) thirty days after the member receives the notice.

Appeal

(4) A member whose membership has been terminated may appeal from the decision of the directors to the next meeting of members by giving written notice to the secretary of the member's intention to appeal no later than thirty days after receiving notice of the special resolution.

Effect of notice of appeal

(5) If a member gives a notice of appeal, the effect of the special resolution is suspended until the vote of the members under subsection (6).

Resolution of members

(6) If a member appeals the termination of membership, a vote of members must be taken at the next meeting of members as to whether the member's membership should be terminated as of the effective date referred to in subsection (3). The vote is by majority of the members present at the meeting, unless a greater proportion is specified in the articles, the bylaws or a unanimous agreement.

Effect of termination of membership

(7) Subject to section 149, if a member's membership is terminated, a cooperative must, no later than one year after the date of the special resolution, redeem all membership shares held by the member at the redemption price determined in accordance with section 146, and repay to the member all member loans and all other amounts held to the member's credit and all amounts outstanding on loans made to the cooperative by the member, together with any interest accrued on those amounts up to the date of the payment.

Termination of membership not to have certain effects

(8) Unless the directors determine otherwise, the termination of the membership of a member does not release the member from any debt or obligation to the cooperative or contract with the cooperative.

If address of member unknown

(9) If the address of a member whose membership has been terminated by the directors is unknown to the cooperative after all reasonable efforts have been made to ascertain it and

two years have elapsed since the effective date referred to in subsection (3), the cooperative must transfer all amounts owing under subsection (7) to a reserve fund, but those amounts do not, despite subsection (7), include any interest that would have accrued after the end of the two years.

Amounts paid to entitled persons

(10) If any amounts are transferred to a reserve fund under subsection (9), the cooperative must pay those amounts to any person who, no later than ten years after the transfer, shows evidence of entitlement satisfactory to the cooperative. If no person appears to show that evidence within the ten years, the amounts become the property of the cooperative.

LIMITATION

Limitation on by-law

41. No by-law governing the withdrawal of a member from membership or the termination of the membership of a member may authorize a redemption of membership shares or member loans in contravention of section 149.

TERMINATION OF MEMBERSHIP BY MEMBERS

Termination by members

42. Unless the by-laws provide otherwise, the membership of a member may be terminated by a special resolution of the members. Section 40 applies, with any modifications that the circumstances require, to a termination by the members.

OTHER TERMINATIONS

Termination of inactive membership

43. (1) A cooperative may, by written notice to a member, terminate the membership if the member

- (a) is a body corporate and winding-up proceedings have commenced with respect to it; or
- (b) failed, during a period of two consecutive years, to transact any business with the cooperative.

Provisions not to apply

(2) Section 40, other than subsections 40(7) to (10), does not apply to a termination under this section.

Non-profit housing cooperatives

44. If the membership of a person in a nonprofit housing cooperative is terminated, any right of the person to possession or occupancy of residential premises acquired by virtue of membership in the cooperative is subject to Part 20.

Re-admission

45. A person whose membership has been terminated under section 40 or 42 may be readmitted to membership only by special resolution of the members.

Transfer

46. No transfer of a membership, a member loan or a membership share in a cooperative is valid for any purpose unless it is approved by the directors and the transferee has otherwise complied with the articles and by-laws of the cooperative and, if applicable, become a party to a unanimous agreement.

If membership too low

47. If the membership of a cooperative is reduced to a number less than the number of members required for incorporation, and if after thirty days notice remains at less than that number, the Director may require the cooperative (a) to apply for a certificate of continuance under the *Canada Business Corporations Act*, if it was incorporated with membership capital; or (b) to be liquidated or dissolved under Part 17.

PART 6

CORPORATE GOVERNANCE MEETINGS

Place of members' meetings

48. (1) Meetings of the members of a cooperative are to be held at the place in Canada provided for in the by-laws or, in the absence of such a provision, at any place in Canada that the directors may determine.

Place of shareholders' meetings

(2) Meetings of the shareholders must be held at the place set out in the articles. If the articles do not set out such a place, the meetings are to be held at the place in Canada that the directors determine, unless all the shareholders entitled to vote at the meeting agree that the meeting is to be held at another place that is not in Canada.

Participation in meeting by electronic means

(3) Unless the by-laws provide otherwise, a member or shareholder may participate in a meeting of the cooperative, in accordance with the regulations, if any, by means of a telephonic, electronic or other communication facility that permits all participants to communicate adequately with each other during the meeting, if the cooperative makes available such a communication facility.

Meeting held by electronic means

(3.1) If the directors of a cooperative, or any other person, call a meeting of the cooperative pursuant to this Act, those directors or that person, as the case may be, may determine that the meeting shall be held, in accordance with the regulations, if any, entirely by means of a telephonic, electronic or other communication facility that permits all participants to communicate adequately with each other during the meeting, if the by-laws so provide.

Presence

(4) A person participating in a meeting referred to in subsection (3) is deemed to be present at the meeting.

Calling members' meetings

49. (1) After holding the organizational meeting referred to in section 82, the directors must call a meeting of the members without delay.

Business at first meeting

(2) The members, at their first meeting, must

- (a) adopt by-laws for the cooperative;
- (b) elect directors in accordance with subsection 81(3); and
- (c) subject to subsection 254(1), appoint an auditor to hold office until the close of the first annual meeting of members.

Calling meetings of the members

50. (1) The directors must call the first annual meeting of members not later than eighteen months after the cooperative comes into existence and an annual meeting of members must be held not later than the earlier of

- (a) fifteen months after holding the last annual meeting, and
- (b) six months after the end of the preceding financial year.

Special meetings

(2) The directors may at any time call a special meeting of the members or of the shareholders.

Order to delay calling of annual meeting

(3) Despite subsection (1), the cooperative may apply to the court for an order extending the time for calling an annual meeting.

Record date

51. (1) The directors may, within the prescribed period, fix in advance a date as the record date for the determination of the members or shareholders who are entitled to receive payment of a dividend or for any other purpose except the right to receive notice of, or to vote at, a meeting.

Record date — members' meetings

(2) For the purpose of determining the persons who are entitled to receive notice of, or to vote at, a meeting of members, the record date is

- (a) the day before the day on which the notice is given; or
- (b) if no notice is given, the day of the meeting.

Record date — notice of shareholders' meetings

(3) For the purpose of determining the shareholders who are entitled to receive notice of a meeting of the shareholders, the directors may, within the prescribed period, fix in advance a date as the record date for that determination.

Record date —voting at shareholders' meetings

(4) For the purposes of determining the shareholders who are entitled to vote at a meeting of shareholders, the directors may, within the prescribed period, fix in advance a date as the record date for that determination.

If no record date fixed

(5) If no record date is fixed under subsection (1) or (3), the record date

(a) for the determination of members or shareholders for any purpose, other than to establish the right of a member or shareholder to receive notice of a meeting or to vote, is the day on which the directors pass the resolution relating to the particular purpose; and

(b) for the determination of shareholders who are entitled to receive notice of a meeting is

(i) the day before the day on which the notice is given, or

(ii) if no notice is given, the day of the meeting.

If record date fixed

(6) If a record date with respect to shareholders is fixed under this section, unless notice of the date is waived by each shareholder whose name is set out in the securities register at the close of business on the day the directors fix the record date, notice of the record date must be given within the prescribed period

(a) by advertisement in a newspaper published or distributed in a place where the cooperative has its registered office and in each place in Canada where it has a transfer agent or where a transfer of its investment shares may be recorded; and

(b) by written notice to each stock exchange in Canada on which the investment shares of the cooperative are listed for trading.

Notice of meetings

52. (1) Notice of the time and place of a meeting of a cooperative must be sent within the prescribed period

(a) to each person who is entitled to vote at the meeting;

(b) to each director; and

(c) to the auditor of the cooperative, if any.

Exception

(1.1) In the case of a cooperative that is not a distributing cooperative, the notice may be sent within a shorter period if so specified in the articles or the by-laws.

Exception

Publication

(2) Notice of the time and place of a meeting of the holders of investment shares of any class that is publicly traded on a recognized stock exchange in Canada may be published once a week for at least four consecutive weeks before the date of the meeting in a newspaper in general circulation in the place where the registered office of the cooperative is situated and in each place in Canada where the cooperative has a transfer agent or where a transfer of the investment shares may be recorded.

By-laws may specify manner of giving notice to members

(3) The by-laws of a cooperative may derogate from this section, but only in respect of the manner in which notice of a meeting of members may be given to members.

Notice not required

53. A notice of a meeting of a cooperative need not be sent to a shareholder who was not registered on the records of the cooperative or its transfer agent on the record date fixed or determined under section 51.

Failure to receive notice

54. Failure to receive notice of a meeting does not deprive a person of a right to vote at the meeting to which the person is otherwise entitled.

Notice when adjournment

55. (1) If a meeting of a cooperative is adjourned for less than thirty days, it is not necessary, unless the by-laws provide otherwise, to give notice of the adjourned meeting, other than by announcement at the earliest meeting that is adjourned.

Notice of adjournment — meetings of members

(2) If a meeting of members is adjourned by one or more adjournments for a total of thirty days or more, notice of the adjourned meeting must be given as for the original meeting.

Notice of adjournment — meetings of shareholders

(3) If a meeting of shareholders is adjourned by one or more adjournments for a total of thirty days or more, notice of the adjourned meeting must be given as for the original meeting but, unless the meeting is adjourned by one or more adjournments for a total of more than ninety days, subsection 165(1) does not apply.

Special business

56. (1) All matters dealt with at a special meeting of a cooperative and all matters dealt with at an annual meeting, except consideration of the financial statements, the auditor's report, the business of the cooperative, the election of directors, the remuneration of directors and the re-appointment of the incumbent auditor, are special business.

Notice if special business is to be transacted

(2) Notice of a meeting of a cooperative at which special business is to be transacted must

- (a) state the nature of the special business in sufficient detail to permit the recipient to form a reasoned judgement with respect to the special business; and
- (b) contain the text of any special resolution to be submitted to the meeting.

Waiver of notice

57. (1) A person who is entitled to attend a meeting of a cooperative may waive notice of the meeting in any manner.

Attendance is waiver

(2) Attendance at a meeting of a cooperative is a waiver of notice of the meeting, except when a person attends the meeting for the express purpose of objecting to the transaction of any business on the ground that the meeting is not lawfully called.

PROPOSALS

Proposals

58. (1) A member may

- (a) submit to the cooperative notice of any matter that the member proposes to raise at an annual meeting; and
- (b) discuss at the meeting any matter in respect of which the member would have been entitled to submit a proposal.

Proposals by members or directors to amend articles

(2) Any member or director may, in accordance with section 290, make a proposal to amend the articles.

Proposals by other persons to amend articles

(2.1) Any other person may, in accordance with section 290, make a proposal to amend the articles if the person

- (a) has been, for at least the prescribed period, the registered holder or the beneficial owner of at least the prescribed number of outstanding investment shares of the cooperative; or
- (b) has the support of persons who, in the aggregate, and including or not including the person that submits the proposal, have been, for at least the prescribed period, the registered holders, or the beneficial owners of, at least the prescribed number of outstanding investment shares of the cooperative.

Information to be provided

(2.2) A proposal submitted by a person described in paragraph (2.1)(a) must be accompanied by the following information:

- (a) the name and address of the person and of the person's supporters, if applicable; and
- (b) the number of investment shares held or owned by the person and by the person's supporters, if applicable, and the date the investment shares were acquired.

Information not part of proposal

(2.3) The information provided under subsection

(2.2) does not form part of the proposal or of the supporting statement referred to in subsection (3) and is not included for the purposes of the prescribed maximum word limit set out in subsection (3).

Proof may be required

(2.4) If requested by the cooperative within the prescribed period, a person who submits a proposal must provide proof, within the prescribed period, that the person meets the requirements of subsection (2.1).

Proposal and statement to accompany notice of meeting

(3) A proposal submitted for consideration at a meeting must be attached to the notice of the meeting, together with, if requested by the person making the proposal, a statement in support of the proposal and the name and address of person making the proposal. The statement and the proposal must together not exceed the prescribed maximum number of words.

(a) the proposal is not submitted to the cooperative at least the prescribed number of days before the anniversary date of the notice of meeting that was sent to members and shareholders in connection with the previous annual meeting;

(b) it clearly appears that the primary purpose of the proposal is to enforce a personal claim or redress a personal grievance against the cooperative or its directors, officers, members or security holders;

(c) not more than the prescribed period before the receipt of a proposal, a person failed to present, at a meeting, a proposal that, at the person's request, had been attached by the cooperative to the notice of the meeting;

(d) substantially the same proposal was attached to a notice of meeting relating to a meeting of the cooperative held not more than the prescribed period before the receipt of the proposal and the proposal did not receive the prescribed minimum amount of support at the meeting; or

(e) the rights conferred by subsections (1) and (2) are being abused to secure publicity.

Exception**Cooperative may refuse to include proposal**

(4.1) If

(a) a person described in subsection (2.1) makes a proposal and fails to continue to hold or own the number of investment shares referred to in that subsection up to and including the day of the meeting, or

(b) a member makes a proposal and, prior to the meeting, withdraws from membership in accordance with section 39, the cooperative is not required to include in the notice of a meeting, or attach to it, any proposal submitted by that person for any meeting held within the prescribed period following the date of the meeting.

Liability for circulation

59. No cooperative or person acting on behalf of a cooperative incurs any liability by reason only of circulating a proposal or statement in accordance with section 58.

Refusal to include proposal

60. (1) If a cooperative refuses to include a proposal in a notice of a meeting referred to in section 52, the cooperative must, within the prescribed period after the day on which it receives the proposal or the day on which it receives the proof of ownership under subsection 58(2.4), as the case may be, notify in writing the person submitting the proposal of its intention to omit the proposal from the notice and of the reasons for the refusal.

Restraining order by court

(2) On the application of a person submitting a proposal who claims to be aggrieved by a cooperative's refusal under subsection (1), a court may restrain the holding of the meeting at which the proposal is sought to be presented and make any further order it thinks fit.

Order to omit proposal from notice

(3) A cooperative or any person claiming to be aggrieved by a proposal may apply to a court for an order permitting the cooperative to omit the proposal from a notice of meeting, and the court, if it is satisfied that subsection 58(4) applies, may make any order that it thinks fit.

LISTS**List of persons entitled to receive notice**

61. (1) A cooperative must prepare an alphabetical list of its members as of the record date established under subsection 51(2) or, if the by-laws provide for delegates, of the delegates, who are entitled to receive notice of and vote at a meeting of members.

Entitlement to vote — members' meetings

(2) Subject to subsection 7(3), a member or delegate whose name appears on the list referred to in subsection (1) is entitled to one vote at a meeting of members.

List of shareholders entitled to vote

(3) If a record date for voting is fixed under subsection 51(4), a cooperative must prepare, no later than ten days after the record date, an alphabetical list of shareholders who are entitled to vote as of the record date at a meeting of shareholders that shows the number of investment shares held by each shareholder.

Entitlement to vote

(4) A shareholder named in the list referred to in subsection (3) is entitled to vote the investment shares opposite their name at the meeting to which the list relates.

List of shareholders entitled to receive notice

(5) If a record date for voting is not fixed under subsection 51(4), a cooperative must prepare, not later than ten days after a record date for notice of meeting is fixed under subsection 51(3) or not later than the record date referred to in subsection 51(5), as the case may be, an alphabetical list of shareholders who are entitled to receive notice of a meeting of shareholders as of the record date that shows the number of shares held by each shareholder.

Entitlement to vote

(6) A shareholder whose name appears on the list referred to in subsection (5) is entitled to vote the investment shares shown opposite their name at the meeting to which the list relates, except to the extent that

(a) the shareholder has transferred the ownership of any of those investment shares after the record date, and

(b) the transferee of those investment shares demands, not later than ten days before the meeting, or any shorter period that the bylaws of the cooperative provide, that the transferee's name be included in the list before the meeting and produces properly endorsed investment share certificates or otherwise establishes that the transferee owns the investment shares, in which case the transferee may vote the shares at the meeting.

Examination of list

(7) A person who is entitled to vote at a meeting of a cooperative may examine a list that relates to the meeting

(a) during usual business hours at the registered office of the cooperative or at the place where its records of members and shareholders are maintained; and

(b) at the meeting for which the list was prepared.

PROCEDURE**Quorum**

62. (1) Unless the by-laws provide otherwise, a quorum is present at a meeting of the cooperative if persons holding a majority of the voting rights that may be exercised at the meeting are present in person or represented in a manner provided for by this Act or permitted by the by-laws.

Quorum**Opening quorum sufficient**

(2) If a quorum is present at the opening of a meeting, the persons who are present and entitled to vote may, unless the by-laws provide otherwise, proceed with the business of the meeting even though a quorum is not present throughout the meeting.

Adjournment

(3) If a quorum is not present at the opening of a meeting, the persons who are present and entitled to vote may adjourn the meeting to a fixed time and place but may not transact any other business.

Representative

63. (1) If an entity is entitled to vote at a meeting of a cooperative, the cooperative must recognize any individual authorized by a resolution of the directors or governing body or similar authority of the entity to represent it at meetings of the cooperative.

Powers of representative

(2) An individual who is authorized under subsection (1) to represent an entity may exercise on behalf of the entity all the powers the entity could exercise if it were an individual.

Joint voting — members

64. (1) Unless the by-laws provide otherwise, each joint member may vote at a meeting of members.

Joint voting — shareholders

(2) Unless the articles provide otherwise, if two or more persons hold investment shares jointly, one of those holders present at a meeting of shareholders may, in the absence of the others, vote the investment shares, but if two or more of those persons who are present vote, in person or by proxy, they vote as one on the investment shares jointly held by them.

Voting by show of hands

65. (1) Unless the by-laws provide otherwise, voting at a meeting of a cooperative takes place by a show of hands except when a ballot is demanded by a person who is entitled to vote at the meeting.

Ballot

(2) A person who is entitled to vote at a meeting may demand a ballot either before or after a vote by show of hands.

Electronic voting

(3) Despite subsection (1), unless the bylaws provide otherwise, any vote referred to in subsection (1) may be held, in accordance with the regulations, if any, entirely by means of a telephonic, electronic or other communication facility, if the cooperative makes available such a communication facility.

Voting while participating electronically

(4) Unless the by-laws otherwise provide, a member or shareholder participating in a meeting of the cooperative under subsection 48(3) or (3.1) and entitled to vote at that meeting may vote, in accordance with the regulations, if any, by means of the telephonic, electronic or other communication facility that the cooperative has made available for that purpose.

Resolution in lieu of meeting

66. (1) Unless the by-laws provide otherwise, and except when a written statement is submitted under section 89 or subsection 260(4), a resolution in writing signed by all the persons who are entitled to vote on that resolution at a meeting of the cooperative is as valid as if it had been passed at such a meeting.

Resolution

(2) Unless the by-laws provide otherwise, and except when a written statement is submitted under section 89 or subsection 260(4), a resolution in writing dealing with all matters required by this Act to be dealt with at a meeting of a cooperative, and signed by all the persons who are entitled to vote at the meeting, satisfies all the requirements of this Act relating to meetings.

Copies of resolutions

(3) A copy of every resolution referred to in subsection (1) must be kept with the minutes of the meeting.

Evidence

67. Unless a ballot is demanded, an entry in the minutes of a meeting to the effect that the chairperson of the meeting declared a resolution to be carried or defeated is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the fact without proof of the number or proportion of the votes recorded in favour of or against the resolution.

One shareholder meeting

68. If a cooperative has only one shareholder, or only one holder of any class or series of investment shares, the shareholder present in person or represented by proxy constitutes a meeting of the shareholders or a meeting of shareholders of that class or series.

REQUISITIONS

Requisition of meeting

69. (1) Two or more persons who together hold not less than five per cent of the voting rights that could be exercised at a meeting of a cooperative may requisition the directors to call such a meeting for the purposes stated in the requisition.

Form

(2) The requisition

(a) must state the business to be transacted at the meeting and be sent to each director and to the registered office of the cooperative; and

(b) may consist of several documents of like form, each signed by one or more persons who are entitled to vote at the meeting.

Directors calling meeting

(3) On receipt of the requisition, the directors must call a meeting to transact the business stated in the requisition unless

(a) the directors have called a meeting and given notice of it under section 52;

(b) the business of the meeting as stated in the requisition includes matters described in any of paragraphs 58(4)(b) to (e); or

(c) the business of the meeting as stated in the requisition includes a matter

(i) in the case of a requisition by a member, outside the powers of the members, and

(ii) in the case of a requisition by a shareholder, outside the powers of the shareholders.

Member or shareholder calling meeting

(4) If the directors do not call a meeting within twenty-one days after receiving the requisition, any person who signed the requisition may call the meeting unless any of paragraphs (3)(a) to (c) applies.

Procedure

(5) A meeting called under this section must be called as nearly as possible in the manner in which meetings are to be called pursuant to the by-laws, a unanimous agreement and this Act.

Reimbursement

(6) Unless the persons who are present and entitled to vote at a meeting called under subsection (4) resolve otherwise, the cooperative must reimburse the persons who signed the requisition for the expenses reasonably incurred by them in requisitioning, calling and holding the meeting.

OTHER METHODS OF CALLING MEETINGS

70. [Repealed, 2001, c. 14, s. 157]

Meeting called by court

71. (1) A court, on the application of a director or a person who is entitled to vote at a meeting, may order a meeting of a cooperative to be called, held and conducted within the time and in the manner that the court directs, if

(a) it is not feasible to call the meeting within the time or in the manner in which those meetings are to be called;

(b) it is not feasible to conduct the meeting in the manner required by this Act or the bylaws; or

(c) the court thinks the meeting should be called, held and conducted in the manner it directs for any other reason.

Varying quorum

(2) Without restricting the generality of subsection (1), a court may order that the quorum required by the by-laws or this Act be varied or dispensed with at a meeting called, held and conducted under this section.

Valid meeting

(3) A meeting called, held and conducted under this section is for all purposes a meeting duly called, held and conducted.

Court review of election

72. (1) A cooperative, a director or any person who is entitled to vote in the election or appointment of a director or an auditor may apply to a court to resolve any dispute in respect of the election or appointment of a director or an auditor of the cooperative.

Powers of court

(2) On an application under subsection (1), a court may make any order it thinks fit, including an order

- (a) restraining a director or auditor whose election or appointment is challenged from acting pending determination of the dispute;
- (b) declaring the result of a disputed election or appointment;
- (c) requiring a new election or appointment, and including in the order directions for the management of the business and affairs of the cooperative until a new election is held or a new appointment is made; or
- (d) determining the voting rights of persons claiming to be entitled to vote.

BY-LAWS

Making or amendment of by-law by members

73. (1) The members may, by special resolution, make, amend or repeal any by-law that regulates the business and affairs of the cooperative.

Making or amendment of by-law by directors

(2) Unless the by-laws of a cooperative provide otherwise, the directors may, by special resolution, make a by-law or amend a by-law of the cooperative, but only if the by-law or amendment is not contrary to a by-law made by the members.

Approval

(3) The directors must present a by-law or an amendment to a by-law that is made under subsection (2) to the members at the next meeting of members and the members may, by special resolution, confirm or amend it.

Approbation By-law not confirmed

(4) If a by-law or an amendment to a by-law made by the directors is not confirmed, with or without amendments, under subsection (3), the by-law or amendment is repealed as of the date of the meeting of members at which it was not confirmed.

Proposal of bylaw

74. A member may, in accordance with section 58, make a proposal to make, amend or repeal a by-law.

Effective date of by-law

75. (1) A by-law or an amendment to or repeal of a by-law made by the members is effective from the later of the date of the resolution made under subsection 73(1) and the date specified in the by-law, amendment or repeal.

Effective date of by-law

(2) A by-law or an amendment to a by-law made by the directors is effective from the later of the date the by-law is made or amended by the directors and the date specified in the bylaw, until it is confirmed, with or without amendment, under subsection 73(3) or repealed under subsection 73(4) and, if the by-law is confirmed, or confirmed as amended, it is in effect in the form in which it was so confirmed.

If by-law not approved

(3) If a by-law or an amendment to a by-law made by the directors under subsection 73(2) is not submitted by the directors to the next meeting of the members as required under subsection 73(3), the by-law or amendment ceases to be effective from the date of that meeting.

New resolution of directors

(4) If a by-law or an amendment to a by-law made by the directors under subsection 73(2) is repealed under subsection 73(4) or ceases to be effective under subsection (3), no subsequent resolution of the directors to make or amend a by-law that has substantially the same purpose or effect is effective until it is confirmed, or confirmed as amended, by the members.

PART 7

DIRECTORS AND OFFICERS GENERAL PROVISIONS

Number of directors

76. (1) A cooperative must have at least three directors or any greater minimum number that is set out in the articles.

Effect of decrease

(2) If the articles are amended to decrease the number of directors, the term of any incumbent director is not affected.

Effect of increase

(3) At a meeting to amend the articles to increase the number of directors, the persons who are entitled to do so may elect or appoint the additional number of directors.

Directors as members

77. Not less than two thirds of the directors, or any greater proportion that is provided for by the articles, must be members of the cooperative, or representatives of members that are entities or members of members that are cooperative entities.

Qualifications

78. (1) A person is not qualified to be a director if the person

- (a) is not an individual;
- (b) is less than eighteen years of age;
- (c) is of unsound mind and has been so found by a court in Canada or elsewhere; or
- (d) has the status of bankrupt.

Additional qualifications

(2) A cooperative may provide in its bylaws for qualifications or disqualifications of directors in addition to those in subsection (1).

Status of directors

(3) Unless Part 21 applies to a cooperative, a majority of the directors must be individuals who are not full-time officers or employees of the cooperative.

Resident in Canada

(4) At least twenty-five per cent of the directors must be resident in Canada. However, if the cooperative has only three directors, at least one director must be resident in Canada.

Member election

(5) Subject to subsections 124(3) and (4), all directors are to be elected by the members.

Functions of directors

79. Subject to this Act and to the articles and any unanimous agreement, the directors manage or supervise the management of the business and affairs of the cooperative.

Duties

80. (1) Every director and officer must, in exercising the powers and performing the duties of office,

- (a) act honestly and in good faith with a view to the best interests of the cooperative; and
- (b) exercise the care, diligence and skill that a reasonably prudent person would exercise in comparable circumstances.

Duty of compliance

(2) Every director and officer must comply with this Act, the articles, the by-laws and any unanimous agreement.

Observation**No exculpation**

(3) Subject to subsection 115(5), no provision in a contract, the articles, the by-laws, a unanimous agreement or a resolution relieves a director or officer from complying with this Act and the regulations or from liability for non-compliance.

Notice of directors

81. (1) At the time of sending articles of incorporation, the incorporators must send the Director a notice of directors, in the form that the Director fixes.

First directors

(2) When a cooperative comes into existence, the individuals identified in the notice have all the powers and duties of directors until the first meeting of members.

First meeting

(3) At the first meeting of members after a cooperative comes into existence, the directors are to be elected or appointed in accordance with this Act, the articles, the by-laws and any unanimous agreement.

Organizational meeting

82. (1) After a cooperative comes into existence, a meeting of directors must be held at which the directors may

- (a) adopt forms of security certificates and of cooperative records;
- (b) admit persons to membership in the cooperative and issue or authorize the issuance of membership shares and member loan certificates;
- (c) appoint officers;
- (d) appoint an auditor to hold office until the first meeting of members;
- (e) make arrangements with an appropriate financial institution; and
- (f) transact any other business necessary to organize the cooperative.

Notice

(2) An incorporator or a director may call a meeting of directors referred to in subsection (1) by giving not less than five days notice of the meeting to each director, stating the time and place of the meeting.

Rules for election of directors

83. (1) Unless the articles, the by-laws or a unanimous agreement provides otherwise, the election of the directors must be in accordance with this section, subsection 78(5) and sections 84 to 87 and 124.

Annual election

(2) Elections of directors are to be held annually at a meeting of the persons who are entitled to elect or appoint them.

Term of office

(3) Directors hold office until the close of the meeting at which their successors are elected.

Staggered terms

(4) It is not necessary that all directors elected at a meeting of the cooperative hold office for the same term.

Re-election

(5) Directors may be re-elected.

Election or appointment as director

(6) An individual who is elected or appointed to hold office as a director is not a director and is deemed not to have been elected or appointed to hold office as a director unless

- (a) he or she was present at the meeting when the election or appointment took place and he or she did not refuse to hold office as a director; or
- (b) he or she was not present at the meeting when the election or appointment took place and
 - (i) he or she consented to hold office as a director in writing before the election or appointment or within ten days after it, or
 - (ii) he or she has acted as a director pursuant to the election or appointment.

(7) [Repealed, 2001, c. 14, s. 160]

Secret ballot

(8) Directors are to be elected by secret ballot if the number of nominees exceeds the number of directors to be elected.

Casting ballot

(9) A ballot that is cast for the election of more than the number of directors to be elected is null or void.

Determining election of directors

(10) The individual who receives the greatest number of votes at an election of directors is elected a director and the other individuals who receive, in descending order, the next greatest numbers of votes are also elected directors, until the number of directors to be elected has been elected. If two individuals receive an equal number of votes for the last vacancy on the board, the directors already elected to the board must determine which of the two individuals is to be elected.

Separate election

(11) If shareholders have a right to elect one or more directors, they vote separately from the members.

Maximum term

84. Subject to section 86, no director may hold office for a single term of more than three years.

Vacancy on board

85. (1) Subject to subsection (3), if there is a vacancy on the board of directors, except a vacancy because of an increase in the number or the minimum or maximum number of directors provided for in the articles or because of a failure to elect or appoint the number or minimum number of directors provided for in the articles, and there is still a quorum on the board, the remaining directors may

- (a) continue to fulfil their functions without filling the vacancy; or
- (b) subject to subsection (8), appoint a director to fill the vacancy.

Failure to appoint or elect minimum

(2) If, at the close of a meeting of a cooperative, the persons at the meeting have failed to appoint or elect the number or minimum number of directors required by this Act or the articles, the purported appointment or election of directors at the meeting

- (a) is valid if the directors purported to be appointed or elected and the incumbent directors, if any, whose terms did not expire at the close of the meeting, together constitute a quorum; or
- (b) is null or void if the directors purported to be appointed or elected and the incumbent directors, if any, whose terms did not expire at the close of the meeting, together do not constitute a quorum.

Special meeting

(3) The articles may provide that if there is a vacancy on the board of directors, the remaining directors must call a special meeting of the persons who are entitled to vote for the purpose of electing or appointing directors to fill the vacancy.

Absence of quorum

(4) If there is not a quorum of directors, the directors must, without delay, call a special meeting of the persons who are entitled to vote to fill the vacancy, and if they fail to do so, any person who is entitled to vote at a meeting of the cooperative may call the meeting.

Vacant board

(5) If the board of directors is vacant, any person who is entitled to vote at a meeting of the cooperative may call a special meeting to elect directors to fill the vacancies.

Deemed directors

(6) If all of the directors have resigned or been removed without replacement, a person who manages or supervises the management of the business and affairs of the cooperative is deemed to be a director for the purposes of this Act.

Exceptions

(7) Subsection (6) does not apply to

- (a) an officer who manages the business or affairs of the cooperative under the direction or control of a member, shareholder or other person;
- (b) a lawyer, notary, accountant or other professional who participates in the management of the cooperative solely for the purpose of providing professional services; or
- (c) a trustee in bankruptcy, receiver, receiver-manager or secured creditor who participates in the management of the cooperative or exercises control over its property solely for the purpose of the realization of security or the administration of a bankrupt's estate, in the case of a trustee in bankruptcy.

Exceptions**Class director**

(8) Subject to subsection (3), if there is a vacancy in the position of a director who is to be elected by a class vote of either the members or the shareholders,

- (a) any remaining directors elected or appointed by that class may act under subsection (1); or
- (b) if there are no such remaining directors, any member of the class may act under subsection (5).

Unexpired term

(9) Unless the by-laws provide otherwise, a director who is elected or appointed to fill a vacancy holds office for the unexpired term of their predecessor in office.

Continuation in office

86. If the election of directors does not occur at the time fixed by this Act, the by-laws or a unanimous agreement, the directors then in office continue in office until their successors are elected.

Ceasing to hold office

87. (1) A director ceases to hold office when he or she dies, resigns, is removed from office or is no longer qualified to be a director.

Resignation date

(2) A resignation of a director becomes effective on the later of

- (a) the day a written letter of resignation is sent to the cooperative, and
- (b) the day specified in the letter of resignation.

Removal of directors

88. (1) A director may be removed from office by ordinary resolution at a special meeting of the persons who are entitled to vote in the election or appointment of that director.

Vacancy

(2) The vacancy created by the removal of a director may be filled at the meeting at which the director was removed.

Resignation statement

89. (1) A director who resigns is entitled to submit to the cooperative a written statement giving the reasons for the resignation.

Opposition statement

(2) A director who learns of

- (a) a meeting of the cooperative called for the purpose of removing the director, or
- (b) a meeting of the cooperative, or of the directors, at which another person is to be appointed or elected to succeed or replace the director, is entitled to attend and address the meeting, or to submit a written statement to the cooperative, giving the reasons why the director opposes any proposed action or resolution at the meeting.

Circulation of statement

(3) When the cooperative receives a statement under subsection (1) or (2), it must ensure that a copy of it is sent without delay to the Director and to every person who is entitled to receive notice of the meeting.

Immunity for statement

(4) No cooperative or person acting on its behalf incurs any liability by reason only of circulating a director's statement in compliance with subsection (3).

Right to attend meetings

90. A director is entitled to receive notice of, to attend and to be heard at every meeting of the cooperative.

Notice of change of director or director's address

91. (1) A cooperative must, within fifteen days after

- (a) a change is made among its directors, or
- (b) it receives a notice of change of address of a director referred to in subsection (2), send to the Director a notice, in the form that the Director fixes, setting out the change.

Director's change of address

(2) A director must, within fifteen days after changing his or her address, send the cooperative a notice of that change.

Application to court

(3) Any interested person, or the Director, may apply to a court for an order to require a cooperative to comply with subsection (1), and the court may so order and make any further order it thinks fit.

Place of meetings

92. (1) The directors may meet at any place unless the articles or by-laws provide otherwise.

Notice of meeting

(2) Unless the by-laws provide otherwise, notice of the time and place of a meeting of directors must be given to every director by sending the notice not less than ten days before the date of the meeting to the latest address of the director as shown on the records of the cooperative.

Content of notice

93. Notice of a meeting of directors must specify the time and place of the meeting but need not specify the matter to be dealt with at the meeting, unless the matter is one listed in subsection 109(3).

Waiver of notice

94. A director may, in any manner, waive notice of a meeting of directors and attendance at a meeting constitutes waiver of notice unless the director is attending for the purpose of objecting to the meeting on the ground that it was not lawfully called.

Adjourned meeting

95. There is no need to give notice for the continuation of a meeting of directors that is adjourned or for a meeting of directors that immediately follows an annual meeting.

Quorum

96. Unless the articles, the by-laws or a unanimous agreement provides for a greater proportion, a majority of the number or minimum number of directors, subject to section 97, constitutes a quorum at any meeting of directors or of a committee of directors, and, despite any vacancy among the directors, a quorum of directors may exercise all the powers of the directors.

Quorum

97. (1) To constitute a quorum,

(a) at least twenty-five per cent of the directors at the meeting must be resident in Canada or, if the cooperative has only three directors, at least one of the directors at the meeting must be resident in Canada; and

(b) a majority of the directors at the meeting must be members of the cooperative, or representatives of members that are entities or members of members that are cooperative entities.

Quorum

Exception

(2) Despite subsection (1), a meeting of directors may be held without the number of directors resident in Canada required under that subsection if

(a) a director who is resident in Canada and who is not present approves, in writing or by telephonic, electronic or other communication facilities, the business transacted at the meeting; and

(b) the required number would have been present had that director been present at the meeting.

Participation

98. (1) Subject to the by-laws, a director may, in accordance with the regulations, if any, participate in a meeting of directors or of a committee of directors by means of a telephonic, electronic or other communication facility that permits all participants to communicate adequately with each other during the meeting.

Presence

(2) A director participating in a meeting by a means referred to in subsection (1) is deemed to be present at the meeting.

Validity of acts

99. No act of a director or officer is invalid by reason only of an irregularity in the person's election or appointment or because the director or officer is not qualified to be one.

Resolution in lieu of meeting

100. (1) A resolution in writing, signed by all the directors entitled to vote on that resolution at a meeting of directors or of a committee of directors, is as valid as if it had been passed at a meeting of directors or of a committee of directors.

Copy of resolutions

(2) A copy of every resolution referred to in subsection (1) must be kept with the minutes of the meetings of the directors or committee of directors.

Evidence

(3) Unless a ballot is demanded, an entry in the minutes of a meeting to the effect that the chairperson of the meeting declared a resolution to be carried or defeated is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the fact without proof of the number or proportion of the votes recorded in favour of or against the resolution.

LIABILITY

Directors' liability

101. (1) Directors who vote for or consent to a resolution authorizing the issue of a membership share or an investment share in exchange for a thing or service other than money are jointly and severally, or solidarily, liable to the cooperative to make good any amount by which the thing or service received is less than the fair equivalent of the money that the cooperative would have received if the membership share or investment share had been issued for money on the date of the resolution.

Exemption

(2) A director is not liable under subsection (1) if the director proves that he or she did not know and could not reasonably have known that the membership share or investment share was issued for a thing or service less than the fair equivalent of the money that the cooperative would have received if the membership share or investment share had been issued for money on the date of the resolution.

Further liability

(3) Directors who vote for or consent to resolutions authorizing any of the following matters are jointly and severally, or solidarily, liable to restore to the cooperative any amounts so distributed or paid and not otherwise recovered by the cooperative:

- (a) a redemption or other acquisition of shares or the repayment of member loans contrary to this Act;
- (b) a commission contrary to this Act;
- (c) a payment of a dividend, a patronage return or interest contrary to this Act;
- (d) [Repealed, 2001, c. 14, s. 166]
- (e) a payment of an indemnity contrary to this Act; or
- (f) any other payment contrary to this Act.

Contribution

(4) A director who satisfies a judgment for a debt owed under this section is entitled to contribution from the other directors who were liable for the debt.

Recovery

(5) A director who is liable under subsection (3) may apply to a court for an order to recover any money or property referred to in paragraphs (3)(a) to (f).

Order of court

(6) A court may, on application under subsection (5), if it is satisfied that it is equitable to do so,

- (a) order any person to pay or deliver to the director any money or property referred to in paragraphs (3)(a) to (f) that was paid or distributed to that person;
- (b) order a cooperative to return or issue membership shares or investment shares to a person from whom the cooperative redeemed or otherwise acquired membership shares or investment shares;
- (c) order any person to repay to the cooperative the amount of a member loan that was repaid; or
- (d) make any further order that it sees fit.

Limitation period

(7) An action to enforce a liability imposed by this section may not be commenced more than two years after the date of the resolution authorizing the action complained of.

Prescription Liability for wages

102. (1) Subject to this section and any other applicable law, each director is jointly and severally, or solidarily, liable to the employees of the cooperative for all debts payable to them for services performed while the director held office.

(2) [Repealed, 2001, c. 14, s. 167] (2) [Abrogé, 2001, ch. 14, art. 167]

Amount of liability

(3) The amount of the liability under this section may not exceed six months wages in the case of each employee.

Conditions precedent

(4) A director is not liable under this section unless

(a) the cooperative was sued for the debt within six months after it became due and execution was returned unsatisfied in whole or in part;

(b) the cooperative has commenced liquidation or dissolution proceedings or was dissolved and a claim for the debt was proved no later than six months after the earlier of the date of commencement of the proceedings and the date of the dissolution; or

(c) the cooperative made an assignment or was made subject to a bankruptcy order under the *Bankruptcy and Insolvency Act* and a claim for the debt was proved no later than six months after the date of the assignment or bankruptcy order.

Limitation period

(5) A director is not liable under this section unless he or she is sued while holding office or no later than two years after ceasing to be a director.

Prescription**Amount due after execution**

(6) If execution referred to in paragraph (4)(a) has issued, the amount recoverable from the director is the amount remaining unsatisfied after execution.

Subrogation

(7) If a director pays a debt owed under this section and the debt is proven in liquidation and dissolution or bankruptcy proceedings, the director is entitled to any preference that the employee would have been entitled to and, if judgment is obtained, is entitled to an assignment of the judgment.

Contribution

(8) A director who pays a debt owed under this section is entitled to contribution from the other directors who were liable for the debt.

CONFLICT OF INTERESTS**Disclosure of interest**

103. (1) A director or officer must, in accordance with this section, disclose to the cooperative the nature and extent of any interest that the director or officer has in a material contract or transaction, or a proposed material contract or transaction, with the cooperative, and any material change to any such interest, if the director or officer

(a) is a party to the contract or transaction;

(b) is a director or officer — or an individual acting in a similar capacity — of a party to the contract or transaction; or

(c) has a material interest in a party to the contract or transaction.

Exemption

(2) This section does not require the disclosure of an interest in a contract or transaction that is available to and customarily entered into between the cooperative and its members, if the contract or transaction is on the same terms as are generally available to members.

Exemption**Manner of disclosure**

(3) The director or officer must make the disclosure in writing to the cooperative or request to have it entered in the minutes of the meetings of directors.

Time of disclosure for a director

(4) A director must make the disclosure (a) at the meeting of directors at which the proposed contract or transaction is first considered;

(b) if the director was not interested in the proposed contract or transaction at the time of the meeting referred to in paragraph (a), at the first meeting after the director acquires an interest in it;

(c) if there is a material change in the director's interest in the contract, transaction, proposed contract or proposed transaction, at the first meeting after the change;

(d) if the director becomes interested in a contract or transaction after it is made, at the first meeting after the director acquires an interest in it;

(e) if the director had an interest in the contract or transaction before becoming a director, at the first meeting after becoming a director; or

(f) if the contract or transaction is one that would, in the ordinary course of business, not require the approval of the directors, as soon as the director becomes aware of the contract or transaction.

Time of disclosure for an officer

(5) An officer who is not a director must make the disclosure

- (a) immediately after becoming aware that the contract, transaction, proposed contract or proposed transaction is to be considered or has been considered at a meeting of directors;
- (b) if the officer acquires an interest in a contract or transaction after it is made, immediately after the officer acquires an interest in it;
- (c) if there is a material change in the officer's interest in the contract, transaction, proposed contract or proposed transaction, immediately after the change;
- (d) if the officer had an interest in the contract or transaction before becoming an officer, immediately after becoming an officer; or
- (e) if the contract or transaction is one that would, in the ordinary course of business, not require the approval of the directors, as soon as the officer becomes aware of the contract or transaction.

Access

(6) The members and shareholders may examine the portions of minutes of meetings of directors, of other documents that contain disclosures under this section and of the general notice referred to in section 105 during the usual business hours of the cooperative.

Consultation

(7) [Repealed, 2001, c. 14, s. 168]

Voting

104. (1) A director who is interested in a contract or transaction referred to in subsection 103(1) may not vote on any resolution to approve the contract or transaction.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to

- (a) a contract or transaction that relates primarily to the director's remuneration as a director, officer, employee or agent or mandatary of the cooperative or of one of its subsidiaries; or
- (b) a contract for indemnity or insurance under section 113.

Exception**Continuing disclosure**

105. For the purposes of section 103, a general notice to the directors declaring that the director or officer is a director or officer of an entity or acting in a similar capacity, or has a material interest in an entity, or that there has been a change in the nature of their interest in the entity, and that the director or officer is therefore to be regarded as interested in a contract or transaction made with that entity, as declared in the notice, is a sufficient declaration of interest in a contract or transaction so made.

Effect of disclosure

106. A contract or transaction for which disclosure is required under section 103 is not invalid, and the director or officer is not accountable to the cooperative, its members or its shareholders for any profit realized from the contract or transaction, because of the director's or officer's interest in the contract or transaction or because the director was present or was counted to determine whether a quorum existed at the meeting of directors or committee of directors that considered the contract or transaction, if

- (a) disclosure of the interest was made in accordance with sections 103 to 105;
- (b) the directors approved the contract or transaction; and
- (c) the contract or transaction was reasonable and fair to the cooperative when it was approved.

Confirmation

106.1 Even if the conditions of section 106 are not met, a director or officer, acting honestly and in good faith, is not accountable to the cooperative, its members or its shareholders for any profit realized from a contract or transaction for which disclosure is required under section 103 and the contract or transaction is not invalid by reason only of the interest of the director or officer in the contract or transaction if

- (a) the contract or transaction is approved or confirmed by special resolution at a meeting of the members;
- (b) disclosure of the interest was made to the members in a manner sufficient to indicate its nature before the contract or transaction was approved or confirmed; and
- (c) the contract or transaction was reasonable and fair to the cooperative when it was approved or confirmed.

Court order

107. If a director or officer of a cooperative fails to disclose an interest in a material contract or transaction in accordance with section 103, or otherwise fails to comply with sections 103 to 106.1, a court may, on the application of the cooperative or a member or shareholder, set aside the contract or transaction on any terms that it thinks fit or order that the director or officer account to the cooperative, its members or its shareholders for any profit realized from the contract or transaction.

OFFICERS

Officers

108. Subject to the articles, the by-laws and any unanimous agreement, the directors may

- (a) designate the offices of the cooperative;
- (b) specify the powers and duties of each office;
- (c) appoint any individual of full capacity, including a director, to be an officer;
- (d) appoint one individual to hold more than one office; and
- (e) delegate to the officers the power to manage the business and affairs of the cooperative, except a power referred to in subsection 109(3).

Appointment of managing director or committee

109. (1) The directors may appoint from among themselves a managing director or any committee they consider necessary.

Residency

(2) The managing director must be resident in Canada.

Delegation

(3) The directors may delegate to a managing director or a committee composed of at least three directors any powers of the directors, except the power to

- (a) fill a vacancy among the directors or in the office of the auditor, or appoint additional directors;
- (b) declare dividends on shares, interest on member loans or patronage returns;
- (c) approve a financial statement of the cooperative;
- (d) submit to the persons who are entitled to vote on them questions or matters required to be approved at a meeting of the cooperative;
- (e) make decisions that by this Act, the articles or a unanimous agreement are required to be made by a vote of greater than a majority of the directors;
- (f) redeem or otherwise acquire shares issued by the cooperative;
- (g) pay a commission referred to in section 128, except as authorized by the directors;
- (h) approve a management proxy circular referred to in Part 9;
- (i) issue securities, except in the manner and on the terms authorized by the directors; or
- (j) issue investment shares of a series under section 126 except as authorized by the directors.

Powers

(4) A committee referred to in subsection (1) may exercise the powers that have been delegated to it subject to any restrictions imposed by the directors.

Membership on committee

(5) A director who is appointed to a committee may remain on the committee until the appointment is revoked or the person ceases to be a director.

Duties

(6) A committee appointed under this section must

- (a) fix its quorum at not less than a majority of its members;
- (b) keep minutes of its proceedings; and
- (c) report, at each meeting of the directors, on the proceedings of the committee since the last meeting of the directors.

Obligations

Deemed assent

110. (1) A director who is present at a meeting of directors is deemed to have consented to any resolution made or action taken at the meeting unless

- (a) the director requests that a dissent be entered in the minutes of the meeting or the dissent is so entered;
- (b) the director sends a written dissent to the secretary of the meeting before it is adjourned; or
- (c) the director sends a written dissent by confirmed delivery service or delivers it personally, to the registered office of the cooperative immediately after the meeting is adjourned.

Loss of right to dissent

(2) A director who votes for or expressly consents to a resolution or action taken at a meeting is not entitled to later dissent.

Deemed assent of absent director

(3) A director who is not present at a meeting of directors is deemed to have consented to any resolution made or action taken at the meeting unless the director, within seven days after becoming aware of the resolution or action,

(a) causes a dissent to be entered in the minutes of the meeting; or

(b) sends a written dissent by confirmed delivery service or delivers it personally, to the registered office of the cooperative.

Due diligence

111. A director is not liable under this Part if the director exercised the care, diligence and skill that a reasonably prudent person would have exercised in comparable circumstances, including reliance in good faith on

(a) financial statements of the cooperative represented to the director by an officer of the cooperative or in a written report of the auditor of the cooperative fairly to reflect the financial condition of the cooperative; or

(b) a report of a person whose profession lends credibility to a statement made by the professional person.

Remuneration

112. Unless the articles, the by-laws or a unanimous agreement provides otherwise, the directors may fix the remuneration of the directors, officers and employees of the cooperative.

Indemnification**113.**

(1) A cooperative may indemnify an individual who is or was a director or officer of the cooperative, or who acts or acted at the cooperative's request as a director or officer, or an individual acting in a similar capacity, of another entity, against all costs, charges and expenses, including an amount paid to settle an action or satisfy a claim, reasonably incurred by the individual in respect of any civil, criminal, administrative, investigative or other proceeding in which the individual is involved by reason of their association with the cooperative or entity.

Advance of costs

(2) A cooperative may advance moneys to a director, officer or other individual for the costs, charges and expenses of a proceeding referred to in subsection (1). The individual must repay the moneys if the individual did not fulfil the conditions of subsection (3), unless the members and shareholders decide, by separate resolutions, that the individual need not repay the moneys.

Limitation

(3) A cooperative may not indemnify an individual under subsection (1) unless the individual

(a) acted honestly and in good faith with a view to the best interests of the cooperative, or, as the case may be, to the best interests of the entity for which the individual acted as director or officer or in a similar capacity at the cooperative's request; and

(b) in the case of a criminal or administrative proceeding, had reasonable grounds for believing that the individual's conduct was lawful.

Derivative action

(4) A cooperative may not indemnify an individual under subsection (1) or advance costs under subsection (2) in respect of an action by or on behalf of the cooperative or entity unless a court so orders.

Right to indemnity

(5) An individual referred to in subsection (1) is entitled to indemnity from the cooperative for the costs, charges and expenses referred to in that subsection if the individual

(a) was not judged by the court or other competent authority to have committed any fault or omitted to do anything that the individual ought to have done; and

(b) fulfils the conditions in subsection (3).

Insurance

(6) A cooperative may purchase and maintain insurance for the benefit of an individual referred to in subsection (1) against any liability incurred by the individual by reason of

being or having been a director or officer of the cooperative, having been a director or officer of another entity or having acted in a similar capacity, if the individual acts or acted in that capacity at the cooperative's request.

Application to court

114. (1) A court may, on application of a cooperative or an individual referred to in subsection 113(3), approve an indemnity under section 113 and make any further order that it sees fit.

Notice

(2) On an application under subsection (1), the court may order notice to be given to any interested person and the person is entitled to appear and be heard in person or by counsel.

Restricting powers of directors

115. (1) A provision in the articles of the cooperative or in a unanimous agreement that restricts, in whole or in part, the powers of the directors to manage, or supervise the management of, the business and affairs of the cooperative or vests, in whole or in part, but only in members and subject to subsection 76(1), those powers, is valid.

Deemed unanimous agreement

(2) For the purpose of subsection (1), a unanimous agreement to which another person is also a party is deemed to be a unanimous agreement.

Investment shareholders

(3) A purchaser or transferee of an investment share that is subject to a unanimous agreement is deemed to be party to the unanimous agreement.

When no notice given

(4) If notice is not given to the purchaser or transferee of the existence of a unanimous agreement, in the manner referred to in subsection 183(2) or otherwise, the purchaser or transferee may, no later than thirty days after they become aware of its existence, rescind the transaction by which they acquired the investment shares.

Rights of members

(5) To the extent that a provision in the articles of the cooperative, or in a unanimous agreement, restricts the powers of the directors to manage, or supervise the management of, the business and affairs of the cooperative, members who are given that power to manage or supervise the management of the business and affairs of the cooperative have all the rights, powers, duties and liabilities of directors, whether they arise under this Act or otherwise, including any defences available to the directors, and the directors are relieved of their rights, powers, duties and liabilities, including their liabilities under section 102, to the same extent.

Discretion of shareholders

(6) Nothing in this section prevents members from fettering their discretion when exercising the powers of directors under a unanimous agreement.

(7) and (8) [Repealed, 2001, c. 14, s. 174]

PART 8

CAPITAL STRUCTURE

MEMBERSHIP CAPITAL

Loan capital

116. The capital of a cooperative without membership shares may be in the form of member loans and those loans may be in the amounts, payable at the times, and with or without interest, that the articles of the cooperative provide.

Membership shares

117. A cooperative with membership shares must have one class of membership shares, designated as such in the articles.

Issuance to members

118. (1) Membership shares may be issued only to members, each of whom must hold the minimum number of membership shares prescribed by the by-laws.

Equal rights

- (2) Subject to Parts 20 and 21, the membership shares of a cooperative confer on their holders equal rights, including equal rights to
- (a) receive dividends declared on membership shares; and
 - (b) subject to the articles, receive the remaining property of the cooperative on dissolution.

Membership shares

- (3) The articles may not include any preference, right, condition, restriction, limitation or prohibition on membership shares, except as provided for by this Act.

Restrictions**Transfer requires approval**

- (4) A transfer of membership shares is valid only if it complies with section 46 and any restrictions set out in the by-laws.

Cession**No right to vote**

- (5) The right to vote attaches to membership in accordance with section 37 and not to a membership share.

Redeemable

- (6) Subject to sections 146 and 149, membership shares may be redeemed by the cooperative.

CERTIFICATES**Issue of certificates**

119. (1) The by-laws of a cooperative may provide that no membership share certificates or certificates in respect of member loans need be issued. If the by-laws provide that no such certificates need be issued, the cooperative must, on the request of a member, issue a statement of the number of membership shares held by, or the amount of any member loan of, the member.

Certificates

- (2) The face of each certificate that the cooperative issues in respect of membership shares or member loans after the coming into force of this section must contain
- (a) the name of the cooperative;
 - (b) a statement that the cooperative is subject to this Act;
 - (c) the name of the person to whom it is issued;
 - (d) a statement that the certificate represents membership shares in, or member loans to, the cooperative, and the number of the membership shares or the amount of the member loan;
 - (e) a statement that the certificate is not transferable without the approval of the directors; and
 - (f) a statement that there is a charge on the membership shares or member loans represented by the certificate in favour of the cooperative for any indebtedness of the member to the cooperative.

Certificate of membership

- (3) Each member is entitled to a certificate of membership.

Authorized capital

120. (1) The membership shares of a cooperative may be issued with or without a par value.

Par-value membership shares

- (2) If the membership shares of a cooperative are with a par value, the articles must specify that fact and specify their par value and any limit on their number.

No-par-value membership shares

- (3) If the membership shares of a cooperative are without a par value, the articles must specify that fact and specify any limit on their number.

Fixed or determined value

121. If any no-par-value membership shares of a cooperative are to be issued and are to be redeemed at a fixed or determined value, the articles must set out those facts and state the fixed price or formula to be used to determine the value.

Distribution on dissolution

122. Subject to Parts 20 and 21, the articles of a cooperative may provide that, on dissolution of the cooperative and after the payment of all debts and liabilities — including any declared and unpaid dividends, the amount to be paid to the holders of any investment shares and the amount to be paid on the redemption of membership shares — the value of the remaining property of the cooperative is to be distributed or disposed of to any person, including distribution

- (a) among the members at the time of dissolution, in any manner, including equally among the members irrespective of the number of membership shares or amount of member loans, if any, held or made by a member;
- (b) among the members at the time of dissolution on the basis of patronage returns accrued to those members during a stated period before the dissolution; or
- (c) to charitable organizations or cooperative entities.

Charge on membership shares for amounts

123. (1) A cooperative has a charge on a membership share or any amount standing to the credit of a member or the personal representative of a member for a debt of that member to the cooperative.

Enforcement of charge

(2) A cooperative may

- (a) enforce a charge referred to in subsection (1) in the manner set out in its by-laws; or
- (b) apply any moneys standing to the credit of a member toward payment of a debt due by the member to the cooperative.

INVESTMENT SHARES

Investment shares

124. (1) The articles of a cooperative may provide that the cooperative may issue investment shares, and if they do, the articles must set out the following:

- (a) whether the investment shares may be issued to non-members;
- (b) whether the number of investment shares is to be unlimited and, if not, the maximum number of investment shares that may be issued;
- (c) the number of classes of investment shares; and
- (d) the preferences, rights, conditions, restrictions, limitations and prohibitions attaching to the investment shares and, if there is to be more than one class, the designation of each class and the special preferences, rights, conditions, restrictions, limitations and prohibitions attaching to each class.

No voting rights

(2) Subject to the articles and to this Act, no right to vote at a meeting of the cooperative attaches to an investment share.

Exception

(3) The articles may provide that

- (a) an investment share confers on its holder the right to vote at an election of directors by reason of an event that has occurred and is continuing or by reason of a condition that has been fulfilled; or
- (b) the shareholders, any class of shareholders or the holders of a series of investment shares, may elect a fixed number or a percentage of the directors.

Limit on shareholders' directors

(4) Despite subsections (2) and (3), neither the articles nor a unanimous agreement may provide that the shareholders have the right to elect more than twenty per cent of the directors.

One share, one vote

(5) If shareholders are entitled to vote in accordance with subsection (3) or otherwise in accordance with this Act, each investment share entitles the holder to one vote.

Members may exercise shareholder rights if shareholders

(6) Despite section 37, a member who holds an investment share may exercise any voting right that holders of investment shares have.

No-par-value Shares

125. (1) Investment shares of a cooperative must be in registered form and without a par value.

When cooperative continued

(2) Investment shares of a cooperative that is continued under this Act are deemed to be investment shares without a par value.

Shares in series

126. (1) The articles may authorize, subject to any limitations set out in them and subject to subsection (2), the issue of any class of investment shares in one or more series and may do either or both of the following:

- (a) fix the number of investment shares in, and determine the designation, rights, privileges, restrictions and conditions attaching to the investment shares of, each series; or
- (b) authorize the directors to fix the number of investment shares in, and to determine the designation, rights, privileges, restrictions and conditions attaching to the investment shares of, each series.

Member authorization

(2) No investment share may be issued until the members have authorized the principle of the issuance of investment shares.

Series participation

(3) If any cumulative dividends or amounts payable on return of capital in respect of a series of investment shares are not paid in full, the investment shares of all series of the same class must participate rateably in respect of accumulated dividends and return of capital.

Restrictions on series

(4) No rights, privileges, restrictions or conditions attached to a series of investment shares authorized under this section confer a priority in respect of dividends or return of capital on a series over any other series of investment shares of the same class that are then outstanding.

Amendment of articles

(5) If the directors exercise their authority under paragraph (1)(b), they must, before the issue of shares of the series, send to the Director articles of amendment in the form that the Director fixes to designate a series of investment shares.

Certificate of amendment

(6) On receipt of articles of amendment designating a series of shares under subsection (5), the Director must issue a certificate of amendment.

Effect of certificate

(7) The articles of the cooperative are amended accordingly on the date shown in the certificate of amendment.

Pre-emptive right

127. (1) If the articles so provide, no investment shares of any class may be issued unless the investment shares are first offered to the shareholders of that class. The shareholders of that class have a pre-emptive right to acquire the offered investment shares in proportion to their holdings of the investment shares of that class, at the price at which and on the terms on which those investment shares are to be offered to others.

Limitation

(2) Even if the articles provide the pre-emptive right referred to in subsection (1), shareholders have no pre-emptive right to acquire investment shares that are to be issued

- (a) in exchange for a thing or service other than money;
- (b) as an investment share dividend or in payment of a patronage return; or
- (c) pursuant to the exercise of conversion privileges, options or rights previously granted by the cooperative.

Restriction Commissions

128. The directors may authorize the cooperative to pay a reasonable commission to any person in consideration of the person

- (a) purchasing or agreeing to purchase investment shares from the cooperative or from some other person; or
- (b) procuring or agreeing to procure purchasers for any such investment shares.

Commissions Charge on investment shares

129. (1) Subject to subsection 183(2), the articles may provide that the cooperative has a charge on an investment share registered in the name of a shareholder or the personal

representative of a shareholder for a debt of the shareholder to the cooperative, including an amount unpaid as of the date a body corporate was continued under this Act, in respect of an investment share issued by it.

Enforcement

(2) A cooperative may enforce a charge referred to in subsection (1) in accordance with its by-laws.

CONSTRAINTS

Constraints on shares

130. (1) Subject to subsection 290(3), a distributing cooperative that has issued investment shares that remain outstanding and are held by more than one person may, by special resolution of the members and by a separate special resolution of the shareholders of each class, amend its articles to constrain

(a) the issue or transfer of investment shares of any class or series to persons who are not resident in Canada;

(b) the issue or transfer of investment shares of any class or series to enable the cooperative or any of its affiliates or associates to qualify under any prescribed law of Canada or a province

(i) to obtain a licence to carry on a business,

(ii) to become a publisher of a Canadian newspaper or periodical, or

(iii) to acquire investment shares of a financial intermediary as defined in the regulations;

(c) the issue, transfer or ownership of investment shares of any class or series to assist the cooperative or any of its affiliates or associates to qualify under any prescribed law of Canada or a province to receive licences, permits, grants, payments or other benefits by reason of attaining or maintaining a specified level of Canadian ownership or control;

(d) the issue, transfer or ownership of any investment share to assist the cooperative to comply with any prescribed law; or

(e) the issue, transfer or ownership of any investment share to enable the cooperative to be a registered labour sponsored venture capital corporation under Part X.3 of the *Income Tax Act*.

Exception in respect of paragraph (1)(c)

(2) Paragraph (1)(c) does not permit a constraint on the issue, transfer or ownership of investment shares of any class or series of which any investment shares are outstanding unless the investment shares of that class or series are (2) already subject to a constraint permitted under that paragraph.

Limitation of prohibition of investment shares

(3) If the ownership by a person of investment shares would adversely affect the ability of a cooperative or any of its affiliates or associates to attain or maintain a level of Canadian ownership or control specified in its articles that equals or exceeds a specified level referred to in paragraph (1)(c), the cooperative may, under that paragraph, limit the number of investment shares of the cooperative that may be owned, or prohibit the ownership of investment shares, by that person.

Change or removal of constraint

(4) A cooperative referred to in subsection (1) may, by a special resolution of the members and by a separate special resolution of the shareholders of each class, amend its articles to change or remove any constraint on the issue, transfer or ownership of its investment shares.

Termination

(5) The directors may, if authorized by a special resolution effecting an amendment under subsection (1) or (4), revoke the resolution before it is acted on without further approval.

Regulations

(6) The Governor in Council may make regulations with respect to a cooperative that constrains the issue, transfer or ownership of its investment shares, prescribing

(a) the disclosure required of the constraints in documents issued or published by the cooperative;

(b) the duties and powers of the directors to refuse to issue or register transfers of investment shares in accordance with the articles;

(c) the limitations on voting rights of any investment shares held contrary to the articles;

(d) the powers of the directors to require disclosure of beneficial ownership of investment shares of the cooperative and the right of the cooperative and its directors, employees and agents to rely on that disclosure and the effects of that reliance; and

(e) the rights of any person owning investment shares of the cooperative at the time of an amendment to its articles constraining investment share issues or transfers.

Validity of acts

(7) An issue or a transfer of an investment share or an act of a cooperative is valid despite any failure to comply with this section or the regulations.

Sale of constrained shares

131. (1) A cooperative that has constraints on the issue, transfer or ownership of any class of investment shares may, in accordance with any regulations, sell any of the investment shares that are owned, or that the directors determine may be owned, contrary to those constraints, as if it owned the investment shares, for the purposes of

(a) attaining or maintaining the level of Canadian ownership or control specified in its articles or required by law to carry on a business or qualify for a benefit; or

(b) complying with any prescribed law.

Selection of shares

(2) The directors must select the investment shares to be sold under subsection (1) in good faith and in a manner that does not unfairly prejudice or disregard the interests of the holders of the investment shares in the constrained class as a whole.

Right to proceeds

(3) A person who owned an investment share that was sold under this section is divested of all interests in the investment share and is entitled to receive only the net proceeds of the sale and any net income on the proceeds.

Immunity

(4) Sections 192, 193 and 194 apply to the person referred to in subsection (3) as if the proceeds were a security and the person were a registered owner of the security.

Trust moneys

132. (1) The proceeds of a sale under section 131 are trust moneys in the hands of the cooperative for the benefit of the person who is entitled to receive them.

Handling of trust moneys

(2) Trust moneys under this section

(a) may be commingled with other such trust moneys; and

(b) must be invested as may be prescribed.

Costs of administration

(3) Reasonable costs of administration of trust moneys referred to in subsection (1) may be deducted from the trust moneys and any income earned on them.

Appointment of trust company

(4) Subject to this section, a cooperative may transfer any trust moneys referred to in subsection (1), and the administration of them, to a trust company in Canada registered as one under the laws of Canada or a province, and the cooperative is discharged of all further liability in respect of the trust moneys.

Discharge of cooperative and trust company

(5) A receipt signed by a person entitled under subsection 131(3) to receive the proceeds of a sale that constitute trust moneys under subsection (1) constitutes a complete discharge of the cooperative and of any trust company to which trust moneys are transferred under subsection (4), in respect of the trust moneys and income earned on them paid to the person.

Vesting in Crown

(6) Trust moneys described in subsection (1), together with any income earned on them, less any taxes and costs of administration, that has not been claimed by a person entitled under subsection 131(3) to receive the proceeds of a sale that constitute the trust moneys for a period of ten years after the date of the sale vests in Her Majesty in right of Canada.

Escheats Act applies

(7) Sections 3 to 5 of the *Escheats Act* apply in respect of a trust fund that vests in Her Majesty in right of Canada under subsection (6).

Election of directors

133. (1) If the holders of a class or series of investment shares of a cooperative have, under section 124, a right to elect or appoint one or more directors, or have a right to elect or appoint one or more directors by reason of an event that has occurred and is continuing or by reason of a condition that has been fulfilled, the directors must call the following meetings for the purpose of electing or appointing the director or directors:

- (a) a special meeting of the holders of the class or series of investment shares, to be called within six months or at any earlier date that may be specified in the articles, after the date on which investment shares of the class or series are first issued or after the event has occurred or the condition has been fulfilled; and
- (b) an annual meeting of those holders for every subsequent year.

Cumulative voting

(2) If the articles so provide, directors who are to be elected by holders of investment shares may be elected by cumulative voting.

When cumulative voting

(3) If the articles provide for cumulative voting,

- (a) the articles must require a fixed number of directors to be elected by the holders of investment shares, and not a minimum and maximum number of directors;
- (b) each shareholder who is entitled to vote at an election of directors by holders of investment shares has the right to cast a number of votes equal to the number of votes attached to the investment shares held by that shareholder multiplied by the number of directors to be elected, and the shareholder may cast all the votes in favour of one candidate or distribute them among the candidates in any manner;
- (c) a separate vote of shareholders must be taken with respect to each candidate nominated for director unless a resolution is passed unanimously permitting two or more persons to be elected by a single resolution;
- (d) if a shareholder has voted for more than one candidate without specifying the distribution of votes among the candidates, the shareholder is deemed to have distributed their votes equally among the candidates for whom the shareholder voted;
- (e) if the number of candidates nominated for director exceeds the number of positions to be filled, the candidates who receive the least number of votes are eliminated until the number of candidates remaining equals the number of positions to be filled;
- (f) each director ceases to hold office at the close of the first annual meeting after their election of the holders of investment shares entitled to elect that director;
- (g) a director may only be removed from office if the number of votes cast in favour of the director's removal is greater than the product of the number of directors and the number of votes cast against the motion; and
- (h) the number of directors required by the articles may only be decreased if the votes cast in favour of the motion to decrease the number of directors is greater than the product of the number of directors and the number of votes cast against the motion.

Amendment of articles

134. (1) The holders of investment shares of a class or, subject to subsection (4), of a series are, unless the articles provide otherwise in the case of an amendment referred to in paragraphs

- (a), (b) and (e), entitled to vote separately as a class or series on a proposal to amend the articles to
 - (a) increase or decrease any maximum number of authorized investment shares of the class, or increase any maximum number of authorized investment shares of a class having rights or privileges equal or superior to the investment shares of the class;
 - (b) effect an exchange, reclassification or cancellation of all or part of the investment shares of the class;
 - (c) add, change or remove the rights, privileges, restrictions or conditions attached to the investment shares of the class, including
 - (i) remove or change prejudicially rights to accrued dividends or rights to cumulative dividends,
 - (ii) add, remove or change prejudicially redemption rights,
 - (iii) reduce or remove a dividend preference or a liquidation preference, or
 - (iv) add, remove or change prejudicially conversion privileges, options, voting, transfer or pre-emptive rights, or rights to acquire securities of a cooperative, or sinking fund provisions;
 - (d) increase the rights or privileges of any class of shares having rights or privileges equal or superior to the investment shares of the class;
 - (e) create a new class of investment shares equal or superior to the investment shares of the class;
 - (f) make any class of investment shares having rights or privileges inferior to the investment shares of the class equal or superior to the investment shares of the class;

- (g) effect an exchange or create a right of exchange of all or part of the investment shares of another class into the investment shares of the class; or
- (h) constrain the issue, transfer or ownership of the investment shares of the class or change or remove a constraint.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply in respect of a proposal to amend the articles to add a right or privilege for a holder to convert investment shares of a class or series into investment shares of another class or series that is subject to a constraint permitted under paragraph 130(1)(c) but otherwise equal to the class or series first mentioned.

Exception Deeming provision

(3) For the purpose of paragraph (1)(e), a new class of investment shares, the issue, transfer or ownership of which is to be constrained by an amendment to the articles under paragraph 130(1)(c), that is otherwise equal to an existing class of shares is deemed not to be equal or superior to the existing class of shares.

Limitation

(4) The holders of a series of investment shares of a class are entitled to vote separately as a series under subsection (1) only if the series is affected by an amendment in a manner different from other investment shares of the same class.

Right to vote

(5) Subsection (1) applies whether or not investment shares of a class or series otherwise carry the right to vote.

Separate resolutions

(6) A proposed amendment to the articles referred to in subsection (1) is adopted when it is approved by a special resolution of the members and by a separate special resolution of the shareholders of each class.

Power to issue investment shares

135. Subject to this Act, the articles, the bylaws and any unanimous agreement, membership shares may only be issued to members, and investment shares may be issued to any person, at any time and for money or in exchange for any thing or service that the directors may determine.

Payment for investment shares

136. (1) A cooperative may not issue an investment share until it is fully paid in money, or past service or any other thing that is not less in value than the fair equivalent of the money that the cooperative would have received if the investment share had been issued for money, but neither a promissory note nor a promise to pay made by a person to whom the investment shares are issued or a person not dealing at arm's length with that person is acceptable in payment of an investment share.

Payment for membership shares

(2) Membership shares may be paid for in money, or past service or any other thing that is not less in value than the fair equivalent of the money that the cooperative would have received if the membership share had been issued for money.

Borrowing

137. Unless the articles, the by-laws or a unanimous agreement provide otherwise, the directors may, subject to subsection 126(2), without the authorization of the members or shareholders,

- (a) borrow money;
- (b) give debt obligations;
- (c) give guarantees;
- (d) create security interests in its property; and
- (e) despite paragraph 108(e) and subsection 109(3), delegate any power referred to in any of paragraphs (a) to (d).

Stated capital account

138. (1) A cooperative that is authorized to issue shares must maintain a stated capital account for each class and series of shares that it issues.

Amounts

(2) A cooperative must add to the appropriate stated capital account the full amount of any money, or the value or any thing or service, that it receives for shares it issues.

Exception for non-arm's length transactions

(3) Despite subsection (2), a cooperative may, subject to subsection (4), add to the stated capital accounts maintained for the shares of classes or series the whole or any part of the amount of the money, or the value of the things and services, it receives in an exchange if the cooperative issues shares

(a) in exchange for

(i) property of a person who immediately before the exchange did not deal with the cooperative at arm's length within the meaning of that expression in the *Income Tax Act*,

(ii) shares of, or another interest in, an entity that immediately before the exchange, or that because of the exchange, did not deal with the cooperative at arm's length within the meaning of that expression in the *Income Tax Act*; or

(iii) property of a person who, immediately before the exchange, dealt with the cooperative at arm's length within the meaning of that expression in the *Income Tax Act*, if the person, the cooperative and all the holders of shares in the class or series of shares so issued consent to the exchange; or

(b) under an amalgamation or arrangement, or to members or shareholders of an amalgamating body corporate who receive the shares in addition to or instead of securities of the amalgamated cooperative.

Limit on addition to a stated capital account

(4) On the issue of a share, a cooperative may not add to a stated capital account in respect of the share it issues an amount greater than the amount of the money, or the value of the thing or service, it received for the share.

Constraint on addition to a stated capital account

(5) The proposed addition of an amount to a stated capital account maintained by a cooperative in respect of a class or series of shares must be approved in advance by a special resolution of the members and, if the cooperative has issued investment shares, by a separate special resolution of the shareholders, the class of shareholders or the holders of the series of investment shares that is affected by the special resolution, if

(a) the amount to be added was not received by the cooperative as consideration for the issue of the shares; and

(b) the cooperative has issued shares of more than one class or series that are outstanding.

Membership share inclusion

(6) For greater certainty, if a cooperative issues membership shares with a par value, the cooperative is deemed, for the purposes of subsection 147(2), sections 151 and 154 and paragraph 299(2)(d), to have a stated capital account for its membership shares that includes each amount that has been received by the cooperative for the membership shares.

Other additions to stated capital account

139. (1) When a body corporate is continued under this Act, it may add to a stated capital account any money, or the value of any thing or service, received by it for a share it issued.

Transitional

(2) When a body corporate is continued under this Act, subsection 138(2) does not apply to the money, or the value of things or services, received by it before it was so continued unless the share in respect of which the money, thing or service received is issued after the body corporate is continued.

Disposition transitoire**Transitional**

(3) When a body corporate is continued under this Act, any amount unpaid in respect of a share issued by the body corporate before it was so continued and paid after it was so continued is added to the stated capital account maintained for the shares of that class or series.

Continued cooperative

(4) For the purposes of subsection 147(2), sections 151 and 154 and paragraph 299(2)(d), when a cooperative is continued under this Act, its stated capital account is deemed to include the amount that would have been included if the cooperative had been incorporated under this Act.

Prorogation Membership shares with a par value

(5) When a cooperative is continued under this Act, subsection 138(6) applies if the cooperative has membership shares with a par value.

Restriction

(6) A cooperative must not reduce its stated capital or any stated capital account except in the manner provided in this Act.

Condition**Surplus accounts**

140. Subject to subsection 138(5), a cooperative continued under this Act may at any time add to a stated capital account any amount it has credited to a retained earnings or other surplus account.

Shares not assessable

141. The shares of a cooperative are non-assessable and the members and shareholders are not liable to the cooperative or to its creditors in respect of them.

Options and rights

142. (1) A cooperative may issue certificates, warrants or other evidence of conversion privileges, options or rights to acquire shares or securities of the cooperative.

Conversion for members only

(2) A conversion privilege, option or right to acquire membership shares may be granted only to members, and is non-transferable.

Conditions

(3) The conditions of the conversion privileges, options or rights must be set out in

(a) the certificate, warrant or other evidence; or

(b) the certificates evidencing the securities to which the conversion privileges, options or rights are attached.

Transferability

(4) Subject to subsection (2), conversion privileges, options or rights to acquire securities of a cooperative may be made transferable or non-transferable, and options and rights to acquire securities of a cooperative may be made separable or inseparable from any securities to which they are attached.

Reserves

143. If the articles limit the number of authorized shares, the cooperative must reserve sufficient authorized shares to meet the exercise of any conversion privileges, or any options or rights issued or granted by the cooperative to acquire shares.

Holding own shares

144. (1) Subject to sections 145 to 149, a cooperative may not

(a) hold any shares in itself or in its holding body corporate; or

(b) permit any of its subsidiaries to hold shares in the cooperative, other than the minimum number of membership shares required by the by-laws of the cooperative to qualify for membership in it.

Disposal of shares

(2) A cooperative must cause any subsidiary that holds shares in the cooperative contrary to subsection (1) to dispose of those shares no later than five years after the date on which

(a) it became a subsidiary; or

(b) the cooperative was continued under this Act.

Exception for holding own shares

145. (1) A cooperative may, and may permit its subsidiaries to, hold, in the capacity of a legal representative, shares in itself or in its holding body corporate only if the cooperative, holding body corporate or subsidiary does not have a beneficial interest in the shares.

Exception**Holding shares by way of security**

(2) A cooperative may hold shares in itself or its holding body corporate by way of security for the purposes of a transaction entered into by it in the ordinary course of a business that includes the lending of money.

Redemption of membership shares

146. Subject to section 149, a cooperative may at any time redeem any of its membership shares, if issued on a par-value basis at par value and if issued on a no-par-value basis in accordance with the price or formula that is set out in its articles, or, if no such price or formula is set out in the articles, at a fair value.

Acquisition of investment shares

147. (1) Subject to its articles and to subsection (2), a cooperative may at any time acquire any investment share issued by it.

Limitation

(2) A cooperative may not make a payment to acquire investment shares if there are reasonable grounds to believe that

(a) the cooperative is, or would after the payment be, unable to pay its liabilities as they become due; or

(b) the realizable value of the cooperative's assets after the payment would be less than the total of the stated capital of all its issued shares and its liabilities.

Redemption of investment shares

(3) Subject to section 149, a cooperative may at any time redeem any of its investment shares that are redeemable, in accordance with any price or formula that may be set out in its articles or, if the articles do not so provide, at fair market value.

Alternative share acquisition

148. Despite section 146 and subsection 147(2), but subject to section 149 and to its articles, a cooperative may acquire shares issued by it

(a) to satisfy the claim of members or shareholders who dissent under section 302;

(b) to comply with an order under section 340;

(c) to settle or compromise a debt or claim asserted by the cooperative;

(d) to eliminate fractional shares; or

(e) to fulfil the terms of a non-assignable option or obligation to purchase shares owned by a director, officer or employee.

Limitation on acquisition or redemption

149. A cooperative may not make a payment to acquire or redeem a share under section 146 or 148 if there are reasonable grounds to believe that

(a) the cooperative is, or would after the payment be, unable to pay its liabilities as they become due; or

(b) the realizable value of the cooperative's assets after the payment would be less than the total of

(i) its liabilities, and

(ii) the amount that would be required to pay the holders of shares that have a right to be paid, on a redemption or liquidation, rateably with or in priority to the holders of the shares to be purchased or redeemed.

Cancellation or resurrection of shares

150. Shares of a cooperative that are redeemed or otherwise acquired by it are cancelled or, if the articles limit the number of authorized shares, restored to the status of unissued shares.

Reduction of capital

151. (1) Subject to subsection (2), a cooperative may reduce its stated capital for any purpose, by special resolution of its members and, if an investment share is proposed to be affected by the reduction, by the holders of the investment shares.

Limitation on reductions

(2) A cooperative may not reduce its stated capital if there are reasonable grounds to believe that

(a) the cooperative is, or would after the payment be, unable to pay its liabilities as they become due; or

(b) the realizable value of the cooperative's assets after the reduction would be less than the total of its liabilities.

Exception

Exception (3) Subsection (2) does not apply to a reduction of stated capital that is not represented by realizable assets.

Non-application If several stated capital accounts

(4) If a cooperative maintains more than one stated capital account, the special resolution to reduce stated capital required by subsection (1) must specify the stated capital account or accounts from which the reduction will be deducted.

Court order

(5) A creditor of a cooperative may apply to a court for an order compelling a person

- (a) to pay to the cooperative an amount equal to any liability of the person that was extinguished or reduced contrary to this section; or
- (b) to pay or deliver to the cooperative any money or property that was paid or distributed to the person as a consequence of a reduction of stated capital made contrary to this section.

Limitation period

(6) No action may be commenced to enforce a liability imposed by this section more than two years after the date of the act complained of.

Prescription**Adjustment of stated capital account**

152. (1) On a redemption or acquisition of any of its shares, a cooperative must adjust the stated capital account in relation to that share by the ratio of the stated capital for that class to that share.

If special resolution

(2) A cooperative must adjust its stated capital account in accordance with any special resolution made under subsection 151(1).

Class or series

(3) On a conversion of investment shares of a cooperative into investment shares of another class or series or a change under section 289, a reorganization under section 303 or the redemption or exchange of investment shares under an order made under section 340, the cooperative must

(a) deduct from the stated capital account maintained for the class or series of shares converted or changed, or subject to the reorganization, redemption or exchange, an amount equal to the result obtained by multiplying the stated capital of the shares of that class or series by the number of shares of that class or series converted or changed, or subject to the reorganization, redemption or exchange, divided by the number of issued shares of that class or series immediately before the conversion, change, reorganization, redemption or exchange; and

(b) add the result obtained under paragraph

(a) and any additional amount received pursuant to the conversion, change, reorganization, redemption or exchange to the stated capital account maintained or to be maintained for the class or series of shares.

Stated capital of interconvertible shares

(4) For the purposes of subsection (3) and subject to its articles, if a cooperative issues two classes of investment shares and there is attached to each such class a right to convert an investment share of the one class into an investment share of the other class, if an investment share of one class is converted into a share of the other class, the amount of stated capital attributable to a share in either class is the aggregate of the stated capital of both classes divided by the number of issued investment shares of both classes immediately before the conversion.

Exception

(5) For the purposes of this section, a cooperative holding shares in itself as permitted by section 145 is deemed not to have redeemed or acquired them.

Conversion or change of investment shares

(6) Investment shares issued by a cooperative and converted into shares of another class or series or changed under section 289, or subject to a reorganization under section 303 or the redemption or exchange of investment shares under an order made under section 340, become shares of the other class or series of shares.

Effect of change of investment shares on number of unissued shares

(7) If the articles limit the number of authorized shares of a class of investment shares of a cooperative and issued shares of that class or of a series of shares of that class have become, under subsection (6), issued investment shares of another class or series, the number of unissued shares of the first-mentioned class is, unless the articles provide

otherwise, increased by the number of investment shares that, under subsection (6), became investment shares of another class or series.

Form of dividend

153. (1) A cooperative may pay a dividend by issuing fully paid shares of the cooperative and, subject to section 154, a cooperative may pay a dividend in money or property, except that membership shares may only be issued to members.

Stated capital account

(2) If shares of a cooperative are issued in payment of a dividend, the declared amount of the dividend stated as an amount of money must be added to the stated capital account.

Limitation on paying dividends

154. A cooperative may not declare or pay a dividend if there are reasonable grounds to believe that

(a) the cooperative is, or would after the payment be, unable to pay its liabilities as they become due; or

(b) the realizable value of the cooperative's assets after payment of the dividend would be less than the total of its liabilities and the stated capital of all its issued shares.

Patronage returns

155. (1) A cooperative may allocate among and credit or pay to the members, as a patronage return, all or a part of the surplus arising from the operations of the cooperative in a financial year in proportion to the business done by the members with or through the cooperative in that financial year, calculated in the manner described in subsection (2) at a rate set by the directors.

Calculation of patronage

(2) For the purpose of subsection (1), the directors may calculate the amount of the business done by each member with or through a cooperative in a financial year by taking into account

(a) the quantity, quality, kind and value of things bought, sold, handled, marketed or dealt in by the cooperative;

(b) the services rendered

(i) by the cooperative on behalf of or to the member, and

(ii) by the member on behalf of or to the cooperative; and

(c) differences that are, in the opinion of the directors, appropriate for different classes, grades or qualities of things and services.

Non-member patronage allocation

(3) The by-laws may provide that a cooperative may allocate among and credit or pay to persons who use the services of the cooperative but who are not members a share of any surplus at a rate that is equal to or less than the rate at which the surplus is distributed to members.

Calculation of non-member patronage

(4) If a cooperative allocates among and credits or pays to persons referred to in subsection (3) a share of any surplus, the directors must calculate the business done by the nonmember patrons in the manner described in subsection (2).

Investment of patronage return

156. (1) A cooperative may, by by-law, provide that the whole, or any part that the directors may determine, of the patronage return of each member in respect of each financial year be applied to the purchase for the member of membership or investment shares in the cooperative.

Contents of bylaw

(2) The by-law must provide for the giving of notice to each member of the number of shares purchased or to be purchased for the member, the manner of issuance or transfer of shares, the payment for the shares out of the patronage returns of members and, if applicable, the issuance and forwarding of certificates to members representing shares so issued or transferred.

Price of shares

(3) No member is required under this section to purchase membership shares, in the case of membership shares with a par value, at a price in excess of their par value, and in the case of membership shares with no par value or investment shares,

- (a) if the articles provide for a fixed price or a price determined in accordance with a formula, in excess of that price; and
- (b) in any other case, in excess of the fair value of the membership shares or the fair market value of the investment shares.

Stated capital account

(4) If shares of a cooperative are issued in payment of a patronage return, the amount of the patronage return, stated as an amount of money, must be added to the stated capital account.

Loans from patronage returns

157. A cooperative may, by by-law, require its members to lend to it the whole, or any part that the directors may determine, of the patronage returns to which they may become entitled in each financial year, on the terms and at the rate of interest that the directors determine, so long as the rate of interest does not exceed the rate that is provided in the by-laws.

Insolvent cooperative

158. If a cooperative is unable to pay its liabilities as they become due, no member need, under section 157, lend a patronage return to the cooperative, and no member need purchase shares under section 156.

MARKETING

Marketing plans

159. (1) Subject to subsection (3), this section applies to a cooperative and its members if the members are required by a marketing plan established under an Act of Parliament or of the legislature of a province to sell or deliver things or render services to or through a producer board or a marketing commission or agency.

Patronage returns

(2) For the purposes of allocating, crediting and paying patronage returns among or to members and of making payments to members as part of the price or proceeds of their things or services, the members referred to in subsection (1) are deemed to have sold and delivered the things or to have rendered the services, or, if the by-laws so specify, any portion or category of the things or services, to the cooperative.

Conditions

(3) The by-laws of a cooperative may provide that this section does not apply to a member until any conditions with respect to the delivery of things or rendering of services set out in the by-laws are fulfilled.

Enforcement of contract to buy shares

161. (1) A cooperative must fulfil its obligations under a contract to buy shares of the cooperative, except if the cooperative can prove that enforcement of the contract would put it in breach of subsection 147(2) or section 149.

Right of claimant

(2) Until the cooperative has fulfilled all its obligations under a contract referred to in subsection (1), the other party retains the status of claimant entitled to be paid as soon as the cooperative is lawfully able to do so or, in a liquidation, to be ranked subordinate to the rights of creditors and to the rights of any class of shareholders whose rights were in priority to the rights given to the class of investment shares being purchased, but in priority to the rights of members and other shareholders.

Debt obligations

162. (1) Debt obligations issued by a cooperative are not redeemed by reason only that the indebtedness evidenced by the debt obligation is repaid.

(2) Debt obligations issued by a cooperative and purchased, redeemed or otherwise acquired may be cancelled or may secure any obligation of the cooperative then existing or later incurred.

PART 9

PROXIES

Interpretation

163. (1) The definitions in this subsection apply in this Part.

“form of proxy” means a written or printed form that, on completion and execution by or on behalf of a shareholder, becomes a proxy.

“intermediary” means a person who holds a security on behalf of another person who is not the registered holder of the security, and includes

(a) a securities broker or dealer required to be registered to trade or deal in securities under the laws of any jurisdiction;

(b) a securities depository;

(c) a financial institution;

(d) in respect of a clearing agency, a securities dealer, trust company, bank or other person, including another clearing agency, on whose behalf the clearing agency or its nominees hold securities of an issuer;

(e) a trustee or administrator of a self-administered retirement savings plan, retirement income fund, education savings plan or other similar self-administered savings or investment plan registered under the *Income Tax Act*;

(f) a nominee of a person referred to in any of paragraphs (a) to (e); and

(g) a person who carries out functions similar to those carried out by individuals or entities referred to in any of paragraphs (a) to (e) and that holds a security registered in its name, or in the name of its nominee, on behalf of another person who is not the registered holder of the security.

“solicit” or “solicitation”

(a) includes

(i) a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,

(ii) a request to execute or not to execute a form of proxy or to revoke a proxy,

(iii) the sending of a form of proxy or other communication to a shareholder under circumstances reasonably calculated to result in the procurement, withholding or revocation of a proxy, and

(iv) the sending of a form of proxy to a shareholder under section 165; but

(b) does not include

(i) the sending of a form of proxy in response to an unsolicited request made by or on behalf of a shareholder,

(ii) the performance of administrative acts or professional services on behalf of a person soliciting a proxy,

(iii) the sending by an intermediary of the documents referred to in section 169,

(iv) a solicitation by a person in respect of investment shares of which they are the beneficial owner,

(v) a public announcement, as prescribed, by a shareholder of how the shareholder intends to vote and the reasons for that decision,

(vi) a communication for the purposes of obtaining the number of investment shares required for a proposal under subsection 58(2.1), or

(vii) a communication, other than a solicitation by or on behalf of the management of the cooperative, that is made to shareholders, in any circumstances that may be prescribed.

“solicitation by or on behalf of the management of a cooperative” means a solicitation by a person pursuant to a resolution or instructions of, or with the acquiescence of, the directors or a committee of directors.

Membership and membership shares excluded

(2) This Part does not apply to a member or membership shares, but a member who is a shareholder may exercise the rights given to a shareholder by this Part for all investment shares held.

Appointing proxyholder

164. (1) A shareholder who is entitled to vote at a meeting of shareholders may appoint a proxyholder or one or more alternate proxyholders, who are not required to be shareholders, to attend and act at the meeting in the manner and to the extent authorized by the proxy and with the authority conferred by the proxy.

Execution of proxy

(2) For a proxy to be valid, it must be executed by the shareholder or by their personal representative authorized in writing.

Validity of proxy

(3) A proxy is valid only at the meeting in respect of which it is given or at any adjournment of that meeting.

Revocation of proxy

(4) A shareholder may revoke a proxy

(a) by depositing a document in writing executed by the shareholder or by their personal representative authorized in writing

(i) at the registered office of the cooperative at any time up to and including the

last business day before the day of the meeting or adjournment at which the proxy is to be used, or

- (ii) with the chairperson of the meeting on the day of the meeting or adjournment; or
- (b) in any other manner permitted by law.

Deposit of proxies

(5) The directors may specify in a notice calling a meeting of shareholders a time not more than forty-eight hours, excluding Saturdays and holidays, before the meeting or adjournment before which time proxies to be used at the meeting must be deposited with the cooperative or its agent.

Mandatory solicitation

165. (1) Subject to subsection (2), the management of a cooperative shall, concurrently with giving notice of a meeting of shareholders, send a form of proxy in prescribed form to each shareholder who is entitled to receive notice of the meeting.

Exception

(2) The management of a cooperative is not required to send a form of proxy under subsection (1) if

- (a) it is not a distributing cooperative; and
- (b) it has fifty or fewer shareholders entitled to vote at a meeting, two or more joint holders being counted as one shareholder.

Exception

Soliciting proxies

166. (1) No person may solicit a proxy unless the applicable circular described in subsection (2) is sent to the auditor of the cooperative, to each shareholder whose proxy is solicited, to each director and, if paragraph (2)(b) applies, to the cooperative.

Circulars

(2) The circular that is to be sent under subsection (1) is

- (a) in the case of solicitation by or on behalf of the management of a cooperative, a management proxy circular in the prescribed form, either as an appendix to or as a separate document accompanying the notice of the meeting; and
- (b) in the case of any other solicitation, a dissident's proxy circular in the prescribed form stating the purposes of the solicitation.

Copy to Director

(3) When a management proxy circular or dissident's proxy circular is sent, a copy of it must be sent to the Director together with a statement in the prescribed form and a copy of any notice of meeting, form of proxy and any other documents for use in connection with the meeting.

Solicitation to fifteen or fewer shareholders

(4) Despite subsection (1), a person may solicit proxies, other than by or on behalf of the management of the cooperative, without sending a dissident's proxy circular, if the total number of shareholders whose proxies are solicited is fifteen or fewer, two or more joint holders being counted as one shareholder.

Solicitation by public broadcast

(4.1) Despite subsection (1), a person may solicit proxies, other than by or on behalf of the management of the cooperative, without sending a dissident's proxy circular, if the solicitation is, in the prescribed circumstances, conveyed by public broadcast, speech or publication.

When all shareholders are members

(5) A management proxy circular need not be sent

- (a) if all the shareholders of a cooperative are members; and
- (b) if management has sent to the shareholders substantially the same information as that required to be sent in the circular, not less than twenty-one days or more than sixty days before the meeting at which the vote to which the circular relates is to be held.

Exemption order

167. (1) On the application of any interested person, the Director may exempt, on any terms that the Director thinks fit, the person from any of the requirements of section 165 or subsection 166(1), which exemption may have retrospective effect.

Publication

(2) The Director must set out in a publication generally available to the public the particulars of all exemptions granted under this section together with the reasons for the exemptions.

Attendance at meeting

168. (1) An individual who solicits a proxy and is appointed proxyholder shall attend the meeting in respect of which the proxy is given in person, or cause an alternate proxyholder to attend it, and shall comply with the directions of the shareholder who appointed the proxyholder.

Rights of a proxyholder

(2) A proxyholder or an alternate proxyholder has the same rights as the shareholder who appointed the proxyholder to speak at a meeting of shareholders in respect of any matter, to vote by way of ballot at the meeting and, except if the proxyholder or alternate proxyholder has conflicting instructions from more than one shareholder, to vote at the meeting in respect of any matter by a show of hands.

Show of hands

(3) Despite subsections (1) and (2), if the chairperson of a meeting of shareholders declares to the meeting that, if a ballot is conducted, the total number of votes attached to shares represented at the meeting by proxy required to be voted against what to the knowledge of the chairperson will be the decision of the meeting in relation to any matter or group of matters is less than five per cent of all the votes that might be cast by shareholders present in person or represented by proxy at the meeting on the ballot, unless a shareholder or proxyholder demands a ballot,

(a) the chairperson may conduct the vote in respect of that matter or group of matters by a show of hands; and

(b) a proxyholder or alternate proxyholder may vote in respect of that matter or group of matters by a show of hands.

Duty of intermediary

169. (1) Shares of a cooperative that are registered in the name of an intermediary or a nominee of an intermediary and not beneficially owned by the intermediary must not be voted unless the intermediary, without delay after receipt of the notice of the meeting, management proxy circular, dissident's proxy circular and any other documents other than the form of proxy sent to shareholders by or on behalf of any person for use in connection with the meeting, sends a copy of the document to the beneficial owner and, except when the intermediary has received written voting instructions from the beneficial owner, a written request for those instructions.

Restriction on voting

(2) An intermediary, or a proxyholder appointed by an intermediary, may not vote shares that the intermediary does not beneficially own and that are registered in the name of the intermediary or in the name of a nominee of the intermediary unless the intermediary or proxyholder, as the case may be, receives written voting instructions from the beneficial owner.

Restrictions relatives au vote

Copies (3) A person by or on behalf of whom a solicitation is made must provide, at the request of an intermediary, without delay, to the intermediary at the person's expense the necessary number of copies of the documents referred to in subsection (1), other than copies of the document requesting voting instructions.

Instructions to Intermediary

(4) An intermediary shall vote or appoint a proxyholder to vote any shares referred to in subsection (1) in accordance with any written voting instructions received from the beneficial owner.

Beneficial owner as proxyholder

(5) If a beneficial owner so requests and provides an intermediary with appropriate documentation, the intermediary must appoint the beneficial owner or a nominee of the beneficial owner as proxyholder.

Validity

(6) The failure of an intermediary to comply with this section does not render null or void any meeting of shareholders or any action taken at the meeting.

Limitation

(7) Nothing in this section gives an intermediary the right to vote shares that the intermediary is otherwise prohibited from voting.

Restraining order

170. (1) If a form of proxy, management proxy circular or dissident's proxy circular contains an untrue statement of a material fact or omits to state a material fact required in it or necessary to make a statement contained in it not misleading in the light of the circumstances in which it was made, the Director or any other interested person may apply to a court and the court may make any order it thinks fit, including

- (a) an order restraining the solicitation or the holding of the meeting, or restraining any person from implementing or acting on a resolution passed at the meeting to which the form of proxy, management proxy circular or dissident's proxy circular relates;
- (b) an order requiring correction of any form of proxy or proxy circular and a further solicitation; and
- (c) an order adjourning the meeting.

Notice to Director

(2) An applicant under this section must give the Director notice of the application and the Director is entitled to appear and to be heard in person or by counsel.

PART 10

INSIDER TRADING

Interpretation 171. (1) The definitions in this subsection apply in this Part.

"business combination" means an acquisition of all or substantially all the property of one entity by another, or an amalgamation of two or more entities, or any similar reorganization between or among two or more entities.

"insider" means, except in section 173,

- (a) a director or officer of a distributing cooperative;
- (b) a director or officer of a subsidiary of a distributing cooperative;
- (c) a director or officer of an entity that enters into a business combination with a distributing cooperative; and
- (d) a person employed or retained by a distributing cooperative.

"officer" means the chairperson of the board of directors, president, vice-president, secretary, treasurer, comptroller, general counsel, general manager, managing director, or any other individual who performs functions for an entity similar to those normally performed by an individual occupying any of those offices.

"share" means an investment share that carries voting rights under the articles or in the circumstances in which voting rights are exercisable with respect to it under this Act, and includes

- (a) a security currently convertible into such an investment share; and
- (b) currently exercisable options and rights to acquire such an investment share or such a convertible security.

Further interpretation

(2) For the purposes of this Part,

- (a) a director or an officer of an entity that beneficially owns, directly or indirectly, shares of a distributing cooperative, or that exercises control or direction over shares of the distributing cooperative, or that has a combination of any such ownership, control and direction, carrying more than the prescribed percentage of voting rights attached to all of the outstanding shares of the distributing cooperative not including shares held by the entity as underwriter while those shares are in the course of a distribution to the public is deemed to be an insider of the distributing cooperative;
- (b) a director or an officer of an entity, or an individual acting in a similar capacity, that is a subsidiary is deemed to be an insider of its holding distributing cooperative;
- (c) a person is deemed to beneficially own shares beneficially owned by an entity controlled by them directly or indirectly;
- (d) an entity is deemed to beneficially own shares beneficially owned by its affiliates; and
- (e) the acquisition or disposition by an insider of an option or right to acquire a share is deemed to be a change in the beneficial ownership of the share to which the option or right to acquire relates.

Membership shares

(3) For the purposes of this Part, the sale of membership shares to members or the making of a member loan to a cooperative is not a distribution to the public.

Prohibition of short sale

172. (1) No insider shall knowingly sell, directly or indirectly, a security of a distributing cooperative or any of its affiliates if the insider selling the security does not own or has not fully paid for the security to be sold.

Calls and puts

(2) No insider shall knowingly, directly or indirectly, buy a put or sell a call in respect of a security of the cooperative or any of its affiliates.

Exception

(3) Despite subsection (1), an insider may sell a security that the insider does not own if the insider owns another security convertible into the security sold or an option or right to acquire the security sold and, no later than ten days after the sale, the insider

(a) exercises the conversion privilege, option or right and delivers the security so acquired to the purchaser; or

(b) transfers the convertible security, option or right to the purchaser.

Definition of “insider”

173. (1) In this section, “insider”, with respect to a cooperative, means

(a) the cooperative;

(b) an affiliate of the cooperative;

(c) a director or an officer of the cooperative or of any persons described in paragraphs (b), (e) or (g);

(d) a member who controls more than ten per cent of the voting rights that may be exercised to elect or appoint a director of the cooperative;

(e) a person who beneficially owns, directly or indirectly, shares of the cooperative or who exercises control or direction over shares of the cooperative, or a combination of any such ownership, control and direction, carrying more than the prescribed percentage of the voting rights attached to all of the outstanding shares of the cooperative other than shares held by the person as underwriter while those shares are in the course of a distribution to the public;

(f) a person, other than a person described in paragraph (g), employed or retained by the cooperative or by a person described in paragraph (g);

(g) a person who engages in or proposes to engage in any business or professional activity with or on behalf of the cooperative;

(h) a person who received, while they were a person described in any of paragraphs (a) to (g) material confidential information concerning the cooperative;

(i) a person who receives material confidential information from a person described in this subsection or in subsection (2) or (2.1), including from a person described in this paragraph, and who knows or who ought reasonably to have known that the person giving the information is a person described in this subsection or in subsection (2) or (2.1), including a person described in this paragraph; and

(j) a prescribed person.

Deemed insiders

(2) For the purposes of this section, a person who proposes to make a take-over bid (as defined in the regulations) for securities of a cooperative, or to enter into a business combination with a cooperative, is an insider of the cooperative with respect to material confidential information obtained from the cooperative and is an insider of the cooperative for the purposes of subsection (6).

Deemed insiders

(2.1) An insider of a person referred to in subsection (2), and an affiliate or associate of such a person, is an insider of the cooperative referred to in that subsection. Paragraphs (1)(b) to (j) apply in determining whether a person is such an insider except that references to “cooperative” in those paragraphs are to be read as references to “person described in subsection (2)”.

Expanded definition of “security”

(3) For the purposes of this section, the following are deemed to be a security of the cooperative:

(a) a put, call or option or other right or obligation to purchase or sell a security of the cooperative; and

(b) a security of another entity whose market price varies materially with the market price of the securities of the cooperative.

Insider trading — compensation to persons

(4) An insider who purchases or sells a security of the cooperative with knowledge of confidential information that, if generally known, might reasonably be expected to affect

materially the value of any of the securities of the cooperative is liable to compensate the seller of the security or the purchaser of the security, as the case may be, for any damages suffered by the seller or purchaser as a result of the purchase or sale, unless the insider establishes that

- (a) the insider reasonably believed that the information had been generally disclosed;
- (b) the information was known, or ought reasonably to have been known, by the seller or purchaser; or
- (c) the purchase or sale of the security took place in the prescribed circumstances.

Insider trading — compensation to cooperative

(5) The insider is accountable to the cooperative for any benefit or advantage received or receivable by the insider as a result of a purchase or sale described in subsection (4) unless the insider establishes the circumstances in paragraph 4(a).

Tipping — compensation to persons

(6) An insider who discloses to another person confidential information with respect to the cooperative that has not been generally disclosed and that, if generally known, might reasonably be expected to affect materially the value of any of the securities of the cooperative is liable to compensate for damages any person who subsequently sells securities of the cooperative to, or purchases securities of the cooperative from, any person that received the information, unless the insider establishes

- (a) that the insider reasonably believed that the information had been generally disclosed;
- (b) that the information was known, or ought reasonably to have been known, to the person who alleges to have suffered the damages;
- (c) that the disclosure of the information was necessary in the course of the business of the insider, except if the insider is a person described in subsection (2) or (2.1); or
- (d) if the insider is a person described in subsection (2) or (2.1), that the disclosure of the information was necessary to effect the take-over bid or the business combination, as the case may be.

Tipping — compensation to cooperative

(7) The insider is accountable to the cooperative for any benefit or advantage received or receivable by the insider as a result of a disclosure of the information as described in subsection (6) unless the insider establishes the circumstances in paragraph (6)(a), (c) or (d).

Measure of damages

(8) The court may assess damages under subsection (4) or (6) in accordance with any measure of damages that it considers relevant in the circumstances. However, in assessing damages in a situation involving a security of a distributing cooperative, the court must consider the following:

- (a) if the plaintiff is a purchaser, the price paid by the plaintiff for the security less the average market price of the security over the twenty trading days immediately following general disclosure of the information; and
- (b) if the plaintiff is a seller, the average market price of the security over the twenty trading days immediately following general disclosure of the information, less the price that the plaintiff received for the security.

Liability

(9) If more than one insider is liable under subsection (4) or (6) with respect to the same transaction or series of transactions, their liability is joint and several, or solidary.

Limitation

(10) An action to enforce a right created by subsections (4) to (7) may be commenced only within two years after discovery of the facts that gave rise to the cause of action.

PART 11

COMPULSORY ACQUISITION

Definitions 174. The definitions in this section apply in this Part.

“dissenting offeree” means a holder of a share of a class for which a take-over bid is made who does not accept the take-over bid, and includes a subsequent holder of that share who acquires it from the first-mentioned holder.

“offer” includes an invitation to make an offer.

“offeree” means a person to whom a take-over bid is made.

“offeree cooperative” means a distributing cooperative whose shares are the object of a takeover bid.

“offeror” means a person, other than an agent or mandatary, who makes a take-over bid, and includes two or more persons who, directly or indirectly,

- (a) make take-over bids jointly or in concert; or
- (b) intend to exercise jointly or in concert voting rights attached to shares for which a take-over bid is made.

“share” means an investment share, with or without voting rights, and includes

- (a) a security currently convertible into such a share; and
- (b) currently exercisable options and rights to acquire such a share or such a convertible security.

“take-over bid” means an offer made by an offeror to shareholders of a distributing cooperative at approximately the same time to acquire all of the shares of a class of issued shares and includes an offer made by a distributing cooperative to repurchase all of the shares of a class of its shares.

Right to acquire 175. (1) If within one hundred and twenty days after the date of a take-over bid the bid is accepted by the holders of not less than ninety per cent of the shares of any class of shares to which the take-over bid relates, other than shares held at the date of the take-over bid by or on behalf of the offeror or an affiliate or associate of the offeror, the offeror is entitled, on complying with this section, to acquire the shares held by the dissenting offerees.

Notice

(2) An offeror may acquire shares held by a dissenting offeree by sending, by confirmed delivery service within sixty days after the date of termination of the take-over bid and in any event within one hundred and eighty days after the date of the take-over bid, a notice to each dissenting offeree stating that

(a) the offerees holding not less than ninety per cent of the shares to which the bid relates accepted the take-over bid;

(b) the offeror is bound to take up and pay for or has taken up and paid for the shares of the offerees who accepted the take-over bid;

(c) a dissenting offeree is required to elect

(i) to transfer their shares to the offeror on the terms on which the offeror acquired the shares of the offerees who accepted the take-over bid, or

(ii) to demand payment of the fair value of their shares in accordance with subsections (10) to (19) by notifying the offeror within twenty days after the offeree receives the notice;

(d) a dissenting offeree who does not notify the offeror in accordance with subparagraph (c)(ii) is deemed to have elected to transfer the shares to the offeror on the same terms on which the offeror acquired the shares from the offerees who accepted the take-over bid; and

(e) a dissenting offeree must send the shares to which the take-over bid relates to the offeree cooperative within twenty days after the offeree receives the offeror's notice.

Notice of adverse claim

(3) Concurrently with sending the notice under subsection (2), the offeror must send to the offeree cooperative a notice of adverse claim in accordance with section 240 with respect to each share held by a dissenting offeree.

Share certificate

(4) A dissenting offeree to whom a notice is sent under subsection (2) must, within twenty days after receiving the notice,

(a) send the share certificates of the class of shares to which the take-over bid relates to the offeree cooperative; and

(b) elect

(i) to transfer the shares to the offeror on the terms on which the offeror acquired the shares of the offerees who accepted the take-over bid, or

(ii) to demand payment of the fair value of the shares in accordance with subsections (10) to (19) by notifying the offeror.

Deemed election

(5) A dissenting offeree who does not notify the offeror in accordance with subparagraph (4)(b)(ii) is deemed to have elected to transfer the shares to the offeror on the same terms on which the offeror acquired the shares from the offerees who accepted the take-over bid.

Payment

(6) Within twenty days after the offeror sends a notice under subsection (2), the offeror must pay or transfer to the offeree cooperative the amount that the offeror would have had to pay to a dissenting offeree if the dissenting offeree had elected to accept the take-over bid under subparagraph (4)(b)(i).

Amounts

(7) The offeree cooperative is deemed to hold in trust for the dissenting shareholders the amounts it receives under subsection (6), and the offeree cooperative must deposit the amounts in a separate account in a body corporate any of whose deposits are insured by the Canada Deposit Insurance Corporation or guaranteed by the Quebec Deposit Insurance Board or by any other similar entity created by the law of another province, and must place any thing received in lieu of money in the custody of such a body corporate.

When cooperative is offeror

(8) A cooperative that is an offeror making a take-over bid to repurchase all of the shares of a class of its shares is deemed to hold in trust for the dissenting shareholders the amounts that it would have had to pay or transfer to a dissenting offeree if the dissenting offeree had elected to accept the take-over bid under subparagraph (4)(b)(i), and the cooperative must deposit the amounts in a separate account in a body corporate any of whose deposits are insured by the Canada Deposit Insurance Corporation or guaranteed by the Quebec Deposit Insurance Board or by any other similar entity created by the law of another province, and must place any thing received in lieu of money in the custody of such a body corporate.

(9) Within thirty days after the offeror sends a notice under subsection (2), the offeree cooperative must

(a) if the payments required by subsection (6) are made and the money or things are deposited as required by subsection (7), issue to the offeror a share certificate in respect of the shares that were held by dissenting offerees;

(b) give to each dissenting offeree who elects to accept the take-over bid terms under subparagraph (4)(b)(i) and who sends share certificates as required by paragraph (4)(a) the money or thing to which the offeree is entitled, disregarding fractional shares, which may be paid for in money; and

(c) if the payments required by subsection (6) are made and the money or things are deposited as required by subsection (7) or (8), send to each dissenting shareholder who has not sent share certificates as required by paragraph (4)(a) a notice stating that

(i) the dissenting shareholder's shares have been cancelled,

(ii) the offeree cooperative or some designated person holds in trust for the dissenting shareholder the money or other things to which that shareholder is entitled as payment for or in exchange for the shares, and

(iii) the offeree cooperative will, subject to subsections (10) to (19), send that money or thing to that shareholder without delay after receiving the shares.

Application to court

(10) If a dissenting offeree has elected to demand payment of the fair value of the shares under subparagraph (4)(b)(ii), the offeror may, within twenty days after it has paid the money or transferred the things under subsection (6), apply to a court to fix the fair value of the shares of that dissenting offeree.

Application to court

(11) If an offeror fails to apply to a court under subsection (10), a dissenting offeree may apply to a court for the same purpose within a further period of twenty days.

Status of dissenter if no court application

(12) If no application is made to a court under subsection (11) within the period set out in that subsection, a dissenting offeree is deemed to have elected to transfer shares to the offeror on the same terms on which the offeror acquired the shares from the offerees who accepted the take-over bid.

Venue

(13) An application under subsection (10) or (11) must be made to a court having jurisdiction in the place where the cooperative has its registered office or in the province where the dissenting offeree resides if the cooperative carries on business in that province.

No security for costs

(14) A dissenting offeree is not required to give security for costs in an application made under subsection (10) or (11).

Absence de caution pour frais

Parties

(15) On an application under subsection (10) or (11),

(a) all dissenting offerees referred to in paragraph (4)(b) whose shares have not been acquired by the offeror must be joined as parties and are bound by the decision of the court; and

(b) the offeror must notify each affected dissenting offeree of the date, place and consequences of the application and of their right to appear and be heard in person or by counsel.

Parties

Powers of court

(16) On an application to a court under subsection (10) or (11), the court may determine whether any other person is a dissenting offeree who should be joined as a party, and the court must then fix a fair value for the shares of all dissenting offerees.

Appraisers

(17) A court may in its discretion appoint one or more appraisers to assist the court to fix a fair value for the shares of a dissenting offeree.

Experts

Final order

(18) The final order of the court must be made against the offeror in favour of each dissenting offeree and for the amount for shares as fixed by the court.

Additional powers

(19) In connection with proceedings under this section, a court may make any order it thinks fit, including an order to

(a) fix the amount of money or things that are required to be held in trust under subsections (7) and (8);

(b) order that the money or thing be held in trust by a person other than the offeree cooperative;

(c) allow a reasonable rate of interest on the amount payable to each dissenting offeree from the date the offeree sends or delivers the share certificates under subsection (4) until the date of payment; and

(d) order that any money payable to a shareholder who cannot be found be paid to the Receiver General, in which case subsection 327(3) applies.

Distributing cooperative

176. (1) If a shareholder holding shares of a distributing cooperative does not receive a notice under this Part, the shareholder may

(a) within ninety days after the date of the end of the take-over bid, or

(b) if the shareholder did not receive an offer pursuant to the take-over bid, within ninety days after the later of

(i) the date of the end of the take-over bid, and

(ii) the date on which the shareholder learned of the take-over bid, require the offeror to acquire those shares.

Obligation to acquire

(2) If a shareholder requires the offeror to acquire shares under subsection (1), the offeror must acquire the shares on the same terms under which the offeror acquired or will acquire the shares of the offerees who accepted the take-over bid.

PART 12

SECURITY CERTIFICATES AND TRANSFERS

INTERPRETATION

Definitions 177. (1) The definitions in this subsection apply in this Part.

“adverse claim”, in respect of a security, includes a claim that a transfer was or would be wrongful or that a particular adverse person is the owner of or has an interest in the security.

“bearer” means the person who is in possession of a security that is payable to bearer or endorsed in blank.

“broker” means a person who is engaged in whole or in part in the business of buying and selling securities and who, in the transaction concerned, acts for, or buys a security from, or sells a security to a customer.

“delivery” means voluntary transfer of possession.

“fiduciary” means a trustee, guardian, committee, curator, tutor, executor, administrator, representative of a deceased person, or any other person acting in a fiduciary capacity.

“fungible”, in relation to securities, means securities of which any unit is, by nature or usage of trade, the equivalent of any other like unit.

“genuine” means free of forgery or counterfeiting.

“good faith purchaser”, with respect to a security in bearer form or order form or a security in registered form issued to the purchaser or endorsed to the purchaser or endorsed in blank, means a purchaser for value in good faith and without notice of any adverse claim who takes delivery of the security.

“holder” means a person who is in possession of a security that is issued or endorsed to the person or to bearer or in blank.

“issuer” includes a cooperative that

(a) is required by this Act to maintain a securities register; or

(b) directly or indirectly creates fractional interests in its rights or property and issues securities as evidence of the fractional interests.

“overissue” means the issue of securities in excess of any maximum number of securities that the issuer is authorized by its articles or a trust indenture to issue.

“purchaser” means a person who takes an interest in a security by sale, mortgage, hypothec, pledge, issue, reissue, gift or any other voluntary transaction.

“security” or “security certificate” means a document issued by a cooperative that is

(a) in bearer, order or registered form,

(b) of a type commonly dealt in on securities exchanges or markets or commonly recognized in any area in which it is issued or dealt in as a medium for investment,

(c) one of a class or series or by its terms divisible into a class or series of documents, and

(d) evidence of an investment share, participation or other interest in or obligation of a cooperative, but does not include

(e) a membership share or a document evidencing a membership share, or

(f) a member loan or a document evidencing a member loan.

“trust indenture” means a trust indenture as defined in section 266.

“valid” means issued in accordance with the applicable law and the articles of the issuer, or validated under section 196.

Negotiable instruments

(2) Except when a transfer is restricted and noted on a security in accordance with subsection 183(2), a security is a negotiable instrument.

Form

(3) A security is in registered form if it

(a) specifies a person who is entitled to the security or to the rights it evidences, and its transfer is capable of being recorded in a securities register; or

(b) bears a statement that it is in registered form.

Order form

(4) A debt obligation is in order form if, by its terms, it is payable to the order of a person specified with reasonable certainty in it or to a person to whom it is assigned.

Bearer form

(5) A security is in bearer form if it is payable to bearer according to its terms and not by reason of an endorsement.

(6) A guarantor for an issuer is deemed to be an issuer to the extent of the guarantee, whether or not the obligation is noted on the security.

APPLICATION

Application

178. This Part governs the transfer or transmission of a security.

SECURITY CERTIFICATES

Security certificate

179. Every security holder is entitled, at their option, to obtain from the cooperative (a) a security certificate that complies with this Act; or
(b) a non-transferable written acknowledgement of their right to obtain a security certificate.

Fee

180. A cooperative may charge a reasonable fee for a security certificate issued in respect of a transfer.

Joint owners

181. If securities are held jointly by more than one person,
(a) a cooperative is not required to issue more than one security certificate in respect of those securities; and
(b) delivery of a security certificate to one of the joint owners is sufficient delivery to them all.

Signatures

182. (1) A security certificate must be signed by at least one of the following persons, or a facsimile of the signature must be reproduced on the certificate:
(a) a director, or an individual on their behalf, or an officer;
(b) a transfer agent or branch transfer agent of the cooperative, or an individual on their behalf; or
(c) a trustee who certifies it in accordance with a trust indenture.

Signatures

Former director

(2) A cooperative may issue security certificates that contain the signature of a person who is no longer a director or officer and the validity of the certificate is not adversely affected.

Contents of certificate

183. (1) The following information must be stated on the face of each security certificate issued by a cooperative:
(a) the name of the cooperative;
(b) the words "Incorporated under the *Canada Cooperatives Act*", "Subject to the *Canada Cooperatives Act*" or "assujetti à la *Loi canadienne sur les coopératives*";
(c) the name of the person to whom it was issued; and
(d) the number and class of shares and the designation of any series that the certificate represents.

Notation of restrictions

(2) No restriction, charge, agreement or endorsement described in subsection (3) is effective against a transferee of a security, issued by a cooperative or by a body corporate before it is continued under this Act, who has no actual knowledge of the restriction, charge, agreement or endorsement unless it or a reference to it is noted conspicuously on the security certificate.

Restrictions, etc.

(3) The restrictions, charges, agreements and endorsements referred to in subsection (2) are
(a) a restriction on transfer other than a constraint under section 130;
(b) a charge in favour of the cooperative;
(c) a unanimous agreement; and
(d) an endorsement under subsection 302(10).

Restrictions

(4) If the issued investment shares of a distributing cooperative remain outstanding and are held by more than one person, the cooperative must not restrict the transfer or ownership of its investment shares of any class or series except by way of a constraint under section 130.

Conspicuous notation

(5) A reference to a constraint on the issue, transfer or ownership of any class or series of investment shares must be noted conspicuously on every security certificate evidencing such a share that is issued after the share becomes subject to the constraint under this Act, if the constraint is one

- (a) for the purpose of attaining or maintaining a level of Canadian ownership or control specified in its articles or required by law to carry on business or qualify for benefit; or
- (b) to comply with any prescribed law.

Effect of failure to note constraint

(6) A failure to note a constraint under subsection (5) does not invalidate the investment share or the security certificate and does not render the constraint ineffective.

Contents of certificate

184. (1) Every share certificate for an investment share of a cooperative that is authorized to issue shares of more than one class or series must clearly state

- (a) the rights, privileges, restrictions and conditions attached to the shares of each class and series that exist when the share certificate is issued; or
- (b) that the class or series of shares that it represents has rights, privileges, restrictions or conditions attached to it and that the cooperative will provide a shareholder, on demand and without charge, with a full copy of the text of
 - (i) any rights, privileges, restrictions and conditions attached to each class authorized to be issued, and to each series, that have been fixed by the directors, and
 - (ii) the authority of the directors to fix the rights, privileges, restrictions and conditions of subsequent series.

Copy of information

(2) If a share certificate for an investment share contains the statement referred to in paragraph (1)(b), the cooperative must provide the shareholder, on demand and without charge, with a copy of

- (a) the rights, privileges, restrictions and conditions attached to each class or series of investment shares authorized to be issued; and
- (b) the authority of the directors to fix the rights, privileges, restrictions and conditions of subsequent series of investment shares in the same class.

Fractional shares

185. (1) A cooperative may issue a certificate for a fractional investment share or may instead issue a scrip certificate in bearer form that entitles the holder to receive a certificate for a full investment share in exchange for sufficient scrip certificates equalling a full investment share.

Conditions

(2) The directors may attach conditions to scrip certificates issued by the cooperative, including conditions that

- (a) the scrip certificates become null or void if not exchanged for an investment share representing a full investment share before a specified date; and
- (b) any investment shares for which the scrip certificates are exchangeable may, despite any pre-emptive right, be issued by the cooperative to any person and the proceeds distributed rateably to the holders of the scrip certificates.

Voting rights

(3) A holder of a fractional investment share is not entitled to exercise voting rights or to receive a dividend in respect of the investment share unless

- (a) the fractional share results from a consolidation of investment shares; or
- (b) the articles of the cooperative provide otherwise.

Exercise of voting rights

(4) A holder of a scrip certificate is not entitled to exercise voting rights or to receive a dividend in respect of the scrip certificate.

REGISTERS**Securities register**

186. (1) A cooperative that issues securities must maintain a securities register in which it records the securities issued by it in registered form, showing with respect to each class or series

- (a) the names, in alphabetical order, and the latest known address of each person who holds or previously held the security;

- (b) the number of securities held by each security holder; and
- (c) the date and particulars of the issue and transfer of each security.

Location of register

(2) The securities register must be maintained at the cooperative's registered office or at any other place in Canada designated by the directors.

Branch registers

(3) A cooperative may maintain additional branch securities registers in other places designated by the directors.

Contents of branch register

(4) A branch securities register only contains particulars of securities issued or transferred at the branch. The same information is also recorded in the central registry.

Destruction of certificates

(5) A cooperative, its agent or mandatary or a trustee as defined in section 266 is not required to produce

(a) a cancelled security certificate in registered form, an instrument referred to in any of subsections 142(1) to (3) that is cancelled or a like cancelled instrument in registered form six years after the date of its cancellation;

(b) a cancelled security certificate in bearer form or an instrument referred to in any of subsections 142(1) to (3) that is cancelled or a like cancelled instrument in bearer form after the date of its cancellation; or

(c) an instrument referred to in any of subsections 142(1) to (3) or a like instrument, irrespective of its form, after the date of its expiration.

Agent

187. A cooperative may appoint an agent to maintain securities registers on its behalf.

Registration

188. The registration of the issue or transfer of an investment share in a securities register maintained by the cooperative is complete and valid registration for all purposes.

Trustee

189. Subject to sections 51, 53 and 61, a cooperative or a trustee as defined in section 266 may treat the person whose name appears on the securities register as the owner of a security as its owner for all purposes.

Proof of ownership

190. If a cooperative restricts the right to transfer its investment shares, the cooperative may, despite section 189, treat a person as the registered holder of a security if the person provides the cooperative with evidence that reasonably meets the requirements of the cooperative that the person is

(a) the heir of a deceased security holder, or the fiduciary of the estate or succession of a deceased security holder, or of a registered security holder who is a minor, an incompetent or incapable person or a missing person; or

(b) a liquidator of, or a trustee in bankruptcy for, a registered security holder.

Proof of ownership

191. A cooperative must treat a person, other than one described in section 190, as being entitled to exercise the rights and privileges attached to a security if the person provides proof that the person has acquired ownership of the security by operation of law or has legal authority to exercise the rights and privileges.

Joint owners

192. If satisfactory proof of the death of a joint holder of a security is provided to a cooperative, it may treat any surviving joint holders as the owner of the security.

Duties of cooperative

193. A cooperative is not required to inquire into the existence of, or see to the performance of, any duty owed to a third person by a registered holder or a person who may be treated as a registered holder of a security.

Minors

194. If an individual who is less than eighteen years of age exercises a right of ownership in a security of a cooperative, no subsequent repudiation or avoidance is effective against the cooperative.

Deceased owner

195. (1) Subject to any applicable law relating to the collection of taxes, a person who is an heir or a fiduciary of an estate or succession of a deceased security holder is entitled to become the registered holder or to designate a registered holder if the person deposits the following information with the cooperative or its transfer agent, together with any reasonable assurances that the cooperative may require:

- (a) the security certificate or, in default of one, a document proving that the deceased was the security holder;
- (b) a document proving the death of the security holder; and
- (c) a document proving that the heir or fiduciary has the right under the law of the place in which the deceased was domiciled immediately before their death to deal with the security.

Endorsement

(2) A security certificate referred to in paragraph (1)(a) must be endorsed

- (a) in the case of a transfer to an heir or fiduciary, by that person; and
- (b) in any other case, in a manner acceptable to the cooperative.

Right of cooperative

(3) Deposit of the documents required by subsection (1) empowers a cooperative or its transfer agent to record in a securities register the transmission of a security from the deceased holder to the heir or fiduciary or to any person that the heir or fiduciary may designate and to treat the person who becomes a registered holder as the owner of the securities.

Overissue

196. (1) Subject to this section, the provisions of this Part that validate a security or compel its issue or reissue do not apply if the validation, issue or reissue of a security would result in overissue.

Identical security

(2) The person who is entitled to a validation or issue may, if there has been an overissue and if a valid security that is similar in all respects to the security involved in the overissue is reasonably available for purchase, compel the issuer to purchase and deliver that security against the surrender of the security that the person holds.

If identical security not available

(3) If a valid security that is similar in all respects to the security involved in the overissue is not reasonably available for purchase, the person who is entitled to the validation or issue may recover from the issuer an amount equal to the price the last purchaser for value paid for the invalid security.

Increase in capital

(4) The overissued securities are valid from the date they were issued only if the issuer increases the number of its authorized securities to a number equal to or greater than the number of securities previously authorized plus the number of the securities overissued.

Exemptions

197. Sections 147 to 149 and 152 do not apply to a payment or purchase by an issuer under section 196.

PROCEEDINGS**Rules of action**

198. The following rules apply in an action on a security:

- (a) each signature on the security certificate or in a necessary endorsement is admitted unless specifically denied in the pleadings;
- (b) a signature on the security is presumed to be genuine and authorized but, if the effectiveness of the signature is in issue, the burden of establishing that it is genuine and authorized is on the party claiming under the signature;
- (c) if a signature is admitted or established, production of a certificate entitles the holder to recover on it unless the other party establishes a defence or defect going to the validity of the security; and
- (d) if the other party establishes the defence or defect, the plaintiff has the burden of establishing that the defect is ineffective against the plaintiff or some other person under whom the claim is made.

DELIVERY**Delivery of securities**

199. (1) A person who is required to deliver securities may deliver any security of the specified issue

- (a) in bearer form;
- (b) in registered form in the name of the transferee; or
- (c) endorsed to the person or in blank.

Limitation

(2) Subsection (1) is subject to any agreement to the contrary, to any applicable Act of Parliament or the legislature of a province or to any applicable regulation or stock exchange rule.

GENERAL

Incorporation by reference

200. (1) The terms of a security include those stated on the security and those incorporated by reference to another document, Act of Parliament or the legislature of a province, regulation, rule or order to the extent that the incorporated terms do not conflict with those stated on the security.

Purchaser without notice

(2) Subsection (1) applies to a good faith purchaser but the incorporation by reference is itself not notice of a defect to the purchaser even if the security expressly states that a person accepting it admits that notice.

Validity of security

201. A security is valid in the hands of a good faith purchaser.

Defence

202. Subject to section 205, the fact that a security is not genuine is a complete defence even against a good faith purchaser.

203. All other defences of an issuer, including non-delivery and conditional delivery of a security, are ineffective against a good faith purchaser.

Deemed notice

204. (1) A purchaser is deemed to have notice of any defect in the issue of a security or any defence of the issuer if the security becomes stale within the meaning of subsection (2).

Stale security

(2) A security becomes stale if

- (a) the purchaser takes the security more than two years after
 - (i) the date on which performance of the principal obligation evidenced by the security was due, or
 - (ii) the set date on or after which the security is to be presented or surrendered for redemption or exchange; or
- (b) the payment of money or the delivery of securities is required in order to present or surrender the security, the money or securities are available on the day for the payment or delivery and the purchaser takes the security more than one year after that day.

Unauthorized signature

205. (1) Subject to subsection (2), an unauthorized signature on a security is ineffective.

Limited effectiveness

(2) An unauthorized signature on a security is effective in favour of a good faith purchaser if the signature was made by

- (a) an authenticating trustee, transfer agent or other person entrusted by the issuer with the duty to sign the security, or similar securities, or to prepare them for signing; or
- (b) an employee of the issuer or a person referred to in paragraph (a) who handles the security in the ordinary course of their duties.

Completion of form

206. If a security contains the signatures necessary for its issue or transfer but is incomplete in another respect, any person may complete it in accordance with their authority.

Enforceability

207. A security that was completed incorrectly is enforceable by a good faith purchaser.

Fraud

208. A completed security that was improperly altered, even if fraudulently altered, remains enforceable but only according to its original terms.

Guarantees

209. (1) A person signing a security as an authenticating trustee, transfer agent or other person entrusted by the issuer with the duty to sign the security guarantees to a good faith purchaser that

(a) the security is genuine;

(b) the person's acts in connection with the security are within the person's authority; and

(c) the person has reasonable grounds for believing that the security is in the form and within the amount the issuer is authorized to issue.

Liability

(2) Unless agreed otherwise, a person referred to in subsection (1) does not assume any further liability for the validity of the security.

Acquisition of rights

210. (1) On delivery of a security, the purchaser of the security acquires the rights in it that the transferor had or had authority to convey.

Claim free

(2) A good faith purchaser of a security acquires it free from any adverse claim.

No better position

(3) A purchaser who was a party to a fraud or illegality affecting a security or who, as a prior holder, had notice of an adverse claim does not have a better position by taking from a later good faith purchaser.

Limited interests

211. A purchaser of a limited interest acquires rights only to the extent of the interest purchased.

Deemed notice

212. (1) A purchaser of a security, or a broker for a seller or purchaser, is deemed to have notice of an adverse claim if

(a) the security has been endorsed "for collection" or "for surrender" or for some other purpose other than transfer; or

(b) the security is in bearer form and has a statement on it that it belongs to a person other than the transferor.

Name

(2) The mere writing of a name on a security is not a statement for the purposes of paragraph (1)(b).

No duty to inquire

213. (1) A purchaser of a security, or a broker for a seller or purchaser, has no duty to inquire into the rightfulness of the transfer and, subject to section 214, has no notice of an adverse claim.

Third party holding

(2) Subsection (1) applies even if the purchaser or broker has notice that the security is held by a third person or is registered in the name of or endorsed by a fiduciary.

Deemed notice

214. A purchaser or broker who knows that the transaction is for the personal benefit of the fiduciary or is otherwise in breach of the fiduciary's duty is deemed to have notice of an adverse claim.

Staleness

215. (1) The following events do not constitute notice of an adverse claim except if the security becomes stale within the meaning of subsection (2):

(a) an event that creates a right to performance of the principal obligation evidenced by the security; or

(b) an event that sets the date on or after which the security is to be presented or surrendered for redemption or exchange.

Staleness of security

(2) A security becomes stale if

(a) the purchaser takes the security more than one year after

(i) the date on which performance of the principal obligation evidenced by the security was due, or

(ii) the date on or after which the security was to be presented or surrendered for redemption or exchange; or

(b) the payment of money or the delivery of securities is required in order to present or surrender the security, the money or securities are available on the day for the payment or delivery and the purchaser takes the security more than six months after that day.

Guarantee

216. (1) A person who presents a security for registration of transfer or for payment or exchange guarantees to the issuer that the person is entitled to do so.

Limitation on guarantee

(2) A good faith purchaser who receives a new, re-issued or re-registered security and who registers a transfer guarantees only that the purchaser has no knowledge of any unauthorized signature in a necessary endorsement.

Content of guarantee

217. A person who transfers a security to a purchaser for value guarantees by the transfer only that

(a) the transfer is effective and rightful;

(b) the security is genuine and has not been materially altered; and

(c) the person knows of nothing that might impair the validity of the security.

Guarantee of intermediary

218. An intermediary delivering a security to a purchaser who knows that the intermediary is an intermediary guarantees only good faith.

Guarantee of broker

219. A broker gives to a customer, to the issuer and to a purchaser the guarantees provided in sections 216 to 218 and has the rights and privileges of a purchaser under those sections, and those guarantees of and in favour of the broker acting as an agent or mandatary are in addition to guarantees given by the customer and guarantees given in favour of the customer.

Right to compel endorsement

220. If a registered security is delivered to a purchaser without a necessary endorsement, the purchaser has the right to demand the endorsement. The purchaser becomes a good faith purchaser after the endorsement.

Definition of “appropriate”

221. (1) In this section, section 222, subsections 229(1) and 237(1) and section 241, “appropriate”, with respect to a person, means that the person is

(a) the person who is specified by the security or by a special endorsement to be entitled to the security;

(b) if a person described in paragraph (a) is described as a fiduciary but is no longer serving as one, either that person or their successor;

(c) if the security or endorsement mentioned in paragraph (a) specifies more than one person as fiduciaries and one or more of those persons is no longer a fiduciary, the remaining fiduciary or fiduciaries, whether or not a successor has been appointed or qualified;

(d) if a person described in paragraph (a) is an individual and is without capacity to act by reason of death, incompetence, minority or other incapacity, the person’s fiduciary;

(e) if the security or endorsement mentioned in paragraph (a) specifies more than one person with right of survivorship and by reason of death not all of the persons can sign, the survivor or survivors;

(f) a person who has the legal power to sign; or

(g) to the extent that a person described in any of paragraphs (a) to (f) may act through an agent or mandatary, the person’s authorized agent or mandatary.

Time for determination

(2) The authority of a person signing is determined as of the time of signing.

Endorsement 222. (1) An endorsement of a security in registered form for the purposes of assignment or transfer is made when an appropriate person signs either the security or a

separate document, or when the signature of an appropriate person is written without more on the back of the security.

Blank or special

- (2) An endorsement may be
- (a) in blank; or
 - (b) special.

Blank endorsement

- (3) An endorsement in blank includes an endorsement to bearer.

Special endorsement

- (4) A special endorsement specifies the person to whom the security is to be transferred, or who has power to transfer it.

Right of holder

- (5) A holder may convert an endorsement in blank into a special endorsement.

Immunity of endorser

223. Unless agreed otherwise, the endorser does not, by the endorsement, assume any obligation that the security will be honoured by the issuer.

224. An endorsement purporting to be an endorsement of only part of a security representing units intended by the issuer to be separately transferable is effective to the extent of the endorsement.

Effect of failure by fiduciary to comply

225. Failure of a fiduciary to comply with the document that is the source of the fiduciary's power or with the law of the jurisdiction governing the fiduciary relationship does not render the fiduciary's endorsement unauthorized for the purposes of this Part.

Effect of endorsement without delivery

226. An endorsement of a security does not constitute a transfer until delivery of the security on which it appears or, if the endorsement is on a separate document, until delivery of both the security and the document.

Endorsement in bearer form

227. An endorsement of a security in bearer form may give notice of an adverse claim under section 212 but does not otherwise affect any of the holder's rights.

Effect of unauthorized endorsement

228. (1) The owner of a security may assert the ineffectiveness of an endorsement against the issuer or a purchaser, other than a good faith purchaser who has in good faith received a new, re-issued or re-registered security on registration of transfer, unless the owner

- (a) has ratified an unauthorized endorsement of the security; or
- (b) is otherwise precluded from impugning the effectiveness of an unauthorized endorsement.

Liability of issuer

- (2) An issuer who registers the transfer of a security on an unauthorized endorsement is liable for improper registration.

Warranties of guarantor of signature

229. (1) A person who guarantees the signature of an endorser of a security warrants that, at the time of signing, the signer was an appropriate person to endorse and the signature was genuine.

Limitation of liability

- (2) A person who guarantees the signature of an endorser does not otherwise warrant the rightfulness of the transfer to which the signature relates.

Warranties of guarantor of endorsement

(3) A person who guarantees the endorsement of a security warrants both the signature and the rightfulness, in all respects, of the transfer to which the signature relates, but an issuer may not require a guarantee of endorsement as a condition to registration of transfer.

Extent of liability

(4) The guarantees referred to in subsections (1) to (3) are made to any person who, relying on the guarantee, takes or deals with the security, and the guarantor is liable to the person for any loss resulting from breach of warranty.

Presumption of delivery

230. Delivery of a security to a purchaser occurs when

- (a) the purchaser or a person designated by the purchaser acquires possession of it;
- (b) the purchaser's securities broker acquires possession of a security specially endorsed to or issued in the name of the purchaser;
- (c) the purchaser's securities broker sends the purchaser confirmation of the purchase and the broker in the broker's records identifies a specific security as belonging to the purchaser; or
- (d) in respect of an identified security to be delivered while still in the possession of a third person, that person acknowledges that it is held for the purchaser.

Presumption of ownership

231. (1) A purchaser is the owner of a security held for the purchaser by a securities broker, but a purchaser is not a holder except in the cases described in paragraphs 230(b) and (c).

Ownership of part of fungible bulk

(2) If a security is part of a fungible bulk, a purchaser of the security is the owner of the proportionate interest in the fungible bulk.

Notice to securities broker of adverse claim

(3) Notice of an adverse claim received by a securities broker or by a purchaser after the broker takes delivery as a holder for value is not effective against the broker or the purchaser, except that, as between the broker and the purchaser, the purchaser may demand delivery of an equivalent security in respect of which no notice of an adverse claim has been received.

Delivery of security

232. (1) Unless agreed otherwise, if a sale of a security is made on a stock exchange or otherwise through securities brokers,

- (a) the selling customer fulfils their duty to deliver when the customer delivers the security to the selling securities broker or to a person designated by the selling securities broker or when they cause an acknowledgement to be made to the selling securities broker; and
- (b) the selling securities broker, including a correspondence broker, acting for a selling customer fulfils their duty to deliver by delivering the security or a like security to the buying securities broker or to a person designated by the buying securities broker or by affecting clearance of the sale in accordance with the rules of the exchange on which the transaction took place.

Duty to deliver

(2) Except as provided otherwise in this section and unless agreed otherwise, a transferor's duty to deliver a security under a contract of purchase is not fulfilled until the transferor delivers the security in negotiable form to the purchaser or to a person designated by the purchaser, or causes an acknowledgement to be made to the purchaser that the security is held for the purchaser.

Delivery to securities broker

(3) A sale to a securities broker purchasing for the securities broker's own account is subject to subsection (2) and not subsection (1), unless the sale is made on a stock exchange.

Right to reclaim possession

233. (1) A person against whom the transfer of a security is wrongful may, against anyone except a good faith purchaser,

- (a) reclaim possession of the security or obtain possession of a new security evidencing all or part of the same rights; or
- (b) claim damages.

Recovery when unauthorized endorsement

(2) If the transfer of a security is wrongful by reason of an unauthorized endorsement, the owner may reclaim possession of the security or a new security even from a good faith purchaser if the ineffectiveness of the purported endorsement is asserted against the purchaser under section 228.

Right to requisites for registration

234. (1) Unless agreed otherwise, a transferor must, on demand, supply a purchaser with proof of the transferor's authority to transfer a security or with any other requisite that is necessary to obtain registration of the transfer of a security, but if the transfer is not for value, it is not necessary for the transferor to provide authority to transfer unless the purchaser pays the reasonable and necessary costs of the proof and transfer.

Rescission of transfer

(2) If a transferor fails to comply with a demand under subsection (1) within a reasonable time, the purchaser may reject or rescind the transfer.

Seizure of security

235. No seizure of a security or other interest evidenced by the security is effective until the person making the seizure obtains possession of the security.

Not liable if good faith delivery

236. An agent or mandatary, or a bailee or depositary, who in good faith has received securities and sold, pledged or delivered them according to the instructions of the mandator, pledgor, depositor or principal is not in breach of a fiduciary duty or otherwise liable even though they have no right to dispose of the securities.

Duty to register transfer

237. (1) If a security in registered form is presented for transfer, the issuer must register the transfer if

- (a) the security is endorsed by an appropriate person;
- (b) reasonable assurance is given that the endorsement is genuine and effective;
- (c) the issuer has no duty to inquire into adverse claims or has discharged that duty;
- (d) all applicable laws relating to the collection of taxes have been complied with;
- (e) the transfer is rightful or is to a good faith purchaser; and
- (f) any transfer fee referred to in section 180 has been paid.

Liability for delay

(2) An issuer who has a duty to register a transfer of a security is liable to the person presenting it for registration for any loss resulting from an unreasonable delay in registration or from the failure or refusal to register the transfer.

Assurance of endorsement

238. (1) An issuer may require an assurance that each necessary endorsement on a security is genuine and effective by requiring a guarantee of the signature of the person endorsing the security and by requiring

- (a) if the endorsement is by an agent or mandatary, reasonable assurance of authority to sign;
- (b) if the endorsement is by a fiduciary, evidence of appointment or incumbency;
- (c) if there is more than one fiduciary, reasonable assurance that all who are required to sign have done so; and
- (d) in any other case, assurance that corresponds as closely as is feasible to the cases set out in paragraphs (a) to (c).

Sufficiency of guarantee

(2) For the purpose of subsection (1), a guarantee of the signature of a person is sufficient if it is signed by or on behalf of a person whom the issuer believes, on reasonable grounds, to be a responsible person.

Standards

(3) An issuer may adopt reasonable standards to determine responsible persons for the purpose of subsection (2).

Sufficiency of evidence of appointment or incumbency

(4) For the purpose of paragraph (1)(b), the following constitute sufficient evidence of appointment or incumbency of a fiduciary:

- (a) in the case of a fiduciary of a deceased security holder's estate or succession, a certified copy of the document referred to in paragraph 195(1)(c) and dated not earlier than sixty days before the day a security is presented for transfer; or
- (b) in the case of any other fiduciary, a copy of a document showing the appointment or other evidence believed by the issuer to be appropriate.

Standards

(5) An issuer may adopt reasonable standards with respect to evidence referred to in paragraph (4)(b).

No notice to issuer

(6) An issuer is deemed not to have notice of the content of a document referred to in subsection (4) that is obtained by the issuer except to the extent that the contents relate directly to appointment or incumbency.

Notice from additional documentation

239. If an issuer, in relation to a transfer, demands assurance other than an assurance specified in subsection 238(1) and obtains a copy of a will, trust or partnership agreement or a bylaw or similar document, the issuer is deemed to have notice of all matters contained in the document that affect the transfer.

Limited duty of inquiry

240. (1) An issuer to whom a security is presented for registration has a duty to inquire into adverse claims if the issuer

(a) receives written notice of an adverse claim at a time and in a manner that provide the issuer with a reasonable opportunity to act on it before the issue of a new, re-issued or re-registered security and the notice discloses the name and address of the claimant, the registered owner and the issue of which the security is a part; or

(b) is deemed to have notice of an adverse claim from a document that it obtained under section 239.

Discharge of duty

(2) An issuer may discharge a duty of inquiry by any reasonable means, including notifying an adverse claimant by registered mail sent to the address provided by the adverse claimant or, if no such address has been provided, to the adverse claimant's residence or regular place of business, that a security has been presented for registration of transfer by a named person and that the transfer will be registered unless, no later than thirty days after the date of sending the notice, the issuer

(a) is served with a restraining order or other order of a court; or

(b) is provided with an indemnity bond sufficient in the issuer's judgement to protect the issuer and any transfer agent or other agent or mandatary of the issuer from any loss that may be incurred by any of them as a result of complying with the adverse claim.

Inquiry into adverse claim

241. (1) Unless an issuer is deemed to have notice of an adverse claim from a document that is obtained under section 239 or has received notice of an adverse claim under subsection 240(1), if a security presented for registration is endorsed by the appropriate person, the issuer has no duty to inquire into adverse claims and, in particular,

(a) an issuer registering a security in the name of a person who is a fiduciary or who is described as a fiduciary is not bound to inquire into the existence, extent or correct description of the fiduciary relationship and the issuer may then assume without inquiry that the newly registered owner continues to be the fiduciary until the issuer receives written notice that the fiduciary is no longer acting as such with respect to the particular security;

(b) an issuer registering a transfer on an endorsement by a fiduciary has no duty to inquire into whether the transfer is made in compliance with the document or with the law of the jurisdiction governing the fiduciary relationship; and

(c) an issuer is deemed not to have notice of the contents of a court record or a registered document even if the record or document is in the issuer's possession and the transfer is made on the endorsement of a fiduciary to the fiduciary specifically or to the fiduciary's nominee.

Duration of notice of adverse claim

242. A written notice of adverse claim received by an issuer is effective for twelve months after the day it was received unless the notice is renewed in writing.

Limitation on issuer's liability

243. (1) Except as provided otherwise in any applicable law relating to the collection of taxes, an issuer is not liable to the owner or any other person who incurs a loss as a result of the registration of a transfer of a security if

(a) the necessary endorsements were on or with the security; and

(b) the issuer had no duty to inquire into adverse claims or had discharged that duty.

Duty of issuer on default

(2) If an issuer has registered a transfer of a security to a person not entitled to it, the issuer must on demand deliver a like security to the owner unless

- (a) the issuer is not liable by virtue of subsection (1);
- (b) the owner is precluded by subsection 244(1) from asserting a claim; or
- (c) the delivery would result in an overissue to which section 196 applies.

Lost or stolen security

244. (1) The owner of a security who fails to notify the issuer of an adverse claim, in writing, within a reasonable time after the owner knows of a loss, apparent destruction or wrongful taking of the security is precluded from asserting against the issuer a claim to a new security if the issuer has registered a transfer of the security.

Duty to issue new security

(2) If the owner of a security claims that the security has been lost, destroyed or wrongfully taken, the issuer shall issue a new security in place of the original security if the owner

- (a) so requests before the issuer has notice that the security has been acquired by a good faith purchaser;
- (b) provides the issuer with a sufficient indemnity bond; and
- (c) satisfies any other reasonable requirements imposed by the issuer.

Duty to register transfer

(3) If, after the issue of a new security under subsection (2), a good faith purchaser of the original security presents the original security for registration of transfer, the issuer shall register the transfer unless registration would result in an overissue to which section 196 applies.

Right of issuer to recover

(4) In addition to the rights that an issuer has by reason of an indemnity bond, the issuer may recover the new security issued under subsection (2) from the person to whom it was issued or any person taking under that person other than a good faith purchaser.

Duty

245. An authenticating trustee, transfer agent or other agent or mandatary of an issuer has, in respect of the issue, registration of transfer and cancellation of a security of the issuer,

- (a) a duty to the issuer to exercise good faith and reasonable diligence; and
- (b) the same obligations to the holder or owner of a security and the same rights, privileges and immunities as the issuer.

Notice to agent or mandatary

246. Notice to an authenticating trustee, transfer agent or other agent or mandatary of an issuer is notice to the issuer in respect of the functions performed by the agent or mandatary.

PART 13**FINANCIAL DISCLOSURE****Annual financial statements to members**

247. (1) Subject to section 248, the directors must place before the members at every annual meeting of members

- (a) comparative financial statements as may be prescribed relating separately to
 - (i) the period that began on the date the cooperative came into existence and ended not more than six months before the annual meeting or, if the cooperative has completed a financial year, the period that began immediately after the end of the last completed financial year and ended not more than six months before the annual meeting, and
 - (ii) the immediately preceding financial year;
- (b) the report of the auditor, if any; and
- (c) any further information respecting the financial position of the cooperative and the results of its operations required by the articles, the by-laws or a unanimous agreement.

Annual financial statements to shareholders

(2) If shareholders have a right to have an annual meeting under subsection 133(1), the directors must place the documents described in subsection (1) before the shareholders at every annual meeting of shareholders.

Exception

(3) Despite paragraph (1)(a) and subsection (2), the financial statements referred to in subparagraph (1)(a)(ii) may be omitted if the reason for the omission is set out in the

financial statements, or in a note to those statements, to be placed before the members at an annual meeting of members and, in a case to which subsection (2) applies, the shareholders at an annual meeting of shareholders.

Exemption

248. The Director may, on application of a cooperative, authorize the cooperative to omit from its financial statements any prescribed item, and the Director may, if the Director reasonably believes that disclosure of any information to be contained in the statements would be detrimental to the cooperative, permit the omission on any reasonable conditions that the Director thinks fit.

Consolidated statements

249. (1) A cooperative must keep at its registered office a copy of the financial statements of each of its subsidiaries and of each entity the accounts of which are consolidated in its financial statements.

Examination

(2) The members and shareholders of a cooperative and their personal representatives may on request examine the statements referred to in subsection (1) during the usual business hours of the cooperative and may take extracts from them free of charge.

Barring examination

(3) A cooperative may, not later than fifteen days after a request to examine under subsection (2), apply to a court for an order barring the right of any person to so examine, and the court may, if it is satisfied that the examination would be detrimental to the cooperative or a subsidiary, bar the right and make any further order it thinks fit.

Interdiction

Notice

(4) A cooperative must give the person requesting to examine under subsection (2) notice of an application under subsection (3), and the person may appear and be heard in person or by counsel.

Approval of financial statements

250. (1) The directors must approve the financial statements referred to in section 247 and the approval is evidenced by the manual signature of one or more directors, or a facsimile of the signatures reproduced on the statements.

Condition precedent

(2) A cooperative may not issue, publish or circulate copies of the financial statements referred to in section 247 unless they are

- (a) approved and signed in accordance with subsection (1); and
- (b) accompanied by the report of the auditor of the cooperative, if any.

Copies to shareholders

251. A cooperative shall send a copy of the documents referred to in section 247 to each member and shareholder, except to a member or shareholder who has informed the cooperative in writing that they do not want a copy of the documents,

- (a) not less than twenty-one days before each annual meeting of members;
- (b) not less than twenty-one days before each annual meeting of shareholders, if subsection 247(2) applies; or
- (c) not later than a resolution in lieu of an annual meeting is signed under section 66.

Copies to Director

252. (1) A distributing cooperative, any of the issued securities of which remain outstanding and are held by more than one person, must send a copy of the documents referred to in section 247 to the Director

- (a) not less than twenty-one days before each annual meeting of members or, without delay after a resolution referred to in paragraph 251(c) is signed; and
- (b) in any event within fifteen months after the last preceding annual meeting of shareholders was held or the resolution referred to in paragraph 251(c) was signed, but no later than six months after the end of the cooperative's preceding financial year.

Subsidiary cooperative

(2) A subsidiary cooperative is not required to comply with this section if its financial statements are consolidated or combined with those of its holding cooperative entity and the statements of its holding cooperative entity are sent to the Director in compliance with this section.

Qualifications of auditor

253. (1) Subject to subsection (5), a person is disqualified from being an auditor of a cooperative if the person is not independent of the cooperative, of any of its affiliates or of the directors or officers of the cooperative or its affiliates.

Independence

(2) For the purposes of this section,

(a) independence is a question of fact; and

(b) a person is deemed not to be independent if the person, or another person with whom the person is in business,

(i) is a director, officer or employee of the cooperative or any of its affiliates, is in business with the cooperative or any of its affiliates, or is in business with a director, officer or employee of the cooperative or any of its affiliates,

(ii) beneficially owns or controls, directly or indirectly, a material interest in the securities of the cooperative or any of its affiliates, or

(iii) has been a receiver, receiver-manager, liquidator or trustee in bankruptcy of the cooperative or any of its affiliates within two years of the proposed appointment of the person as auditor of the cooperative.

Duty to resign

(3) An auditor who becomes disqualified under this section must, subject to subsection (5), resign without delay after becoming aware of the disqualification.

Disqualification order

(4) Any interested person may apply to a court for an order declaring an auditor to be disqualified under this section and the office of auditor to be vacant.

Exemption order

(5) Any interested person may apply to a court for an order exempting an auditor from disqualification under this section and the court may, if it is satisfied that an exemption would not unfairly prejudice the members or shareholders, make an exemption order on any terms that it thinks fit. The order may have retrospective effect.

Appointment of auditor

254. (1) Subject to section 255, the members must, by ordinary resolution, at the first annual meeting of members and at each subsequent annual meeting, appoint an auditor to hold office until the close of the next annual meeting.

Eligibility

(2) An auditor appointed under section 82 is eligible for appointment under subsection (1).

Incumbent auditor

(3) Despite subsection (1), if an auditor is not appointed at a meeting of members, the incumbent auditor continues in office until a successor is appointed.

Remuneration

(4) The remuneration of an auditor may be fixed by ordinary resolution of the members or, if not so fixed, may be fixed by the directors.

Dispensing with auditor

255. (1) A cooperative that is not a distributing cooperative may resolve not to appoint an auditor by

(a) special resolution of the members; and

(b) special resolution of all shareholders, including those who do not otherwise have the right to vote.

Limitation

(2) A resolution under subsection (1) is valid only until the next annual meeting of members.

Ceasing to hold office

256. (1) An auditor of a cooperative ceases to hold office when the auditor dies, resigns or is removed under section 257.

Effective date of resignation

(2) A resignation of an auditor becomes effective on the date on which a written resignation is sent to the cooperative, or on the date specified in the resignation, whichever is later.

Removal of auditor

257. (1) The members may by ordinary resolution at a special meeting remove the auditor from office, unless the auditor was appointed by a court under section 259.

Vacancy

(2) A vacancy created by the removal of an auditor may be filled at the meeting at which the auditor is removed or, if not so filled, may be filled under section 258.

Filling vacancy

258. (1) Subject to subsection (3), the directors must fill a vacancy in the office of auditor without delay after it occurs.

Calling meeting

(2) If there is not a quorum of directors, the directors then in office must, not later than twenty-one days after a vacancy in the office of auditor occurs, call a special meeting of members to fill the vacancy and, if they fail to call a meeting or if there are no directors, the meeting may be called by any member.

Members filling vacancy

(3) The by-laws of a cooperative may provide that a vacancy in the office of auditor may only be filled by vote of the members.

Unexpired term

(4) An auditor appointed to fill a vacancy holds office for the unexpired term of their predecessor.

Court appointed auditor

259. (1) If a cooperative does not have an auditor, the court may, on the application of a member or shareholder, appoint and fix the remuneration of an auditor who holds office until an auditor is appointed by the members.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply if a resolution made under section 255 not to appoint an auditor is in effect.

Right to attend meeting

260. (1) The auditor of a cooperative is entitled to receive notice of every meeting of the cooperative and, at the expense of the cooperative, to attend and be heard at the meetings on matters relating to the auditor's duties.

Duty to attend

(2) If a director or member of a cooperative, whether or not the member is entitled to vote at the meeting, or a shareholder that is entitled to vote at that meeting of shareholders, gives written notice not less than ten days before a meeting of the cooperative to the auditor or a former auditor of the cooperative, the auditor or former auditor shall attend the meeting at the expense of the cooperative and answer questions relating to the auditor's duties.

Notice to cooperative

(3) A director, member or shareholder who sends a notice referred to in subsection (2) must send a copy of the notice to the cooperative at the same time.

Statement of auditor

(4) An auditor is entitled to submit to the cooperative a written statement giving the reasons for the auditor's resignation or the reasons why the auditor opposes a proposed action or resolution set out in any of paragraphs (a) to (d), in any of the following situations:

- (a) the auditor resigns;
- (b) the auditor receives a notice or otherwise learns of a meeting of members called for the purpose of removing the auditor from office;
- (c) the auditor receives a notice or otherwise learns of a meeting of directors or members at which another person is to be appointed to fill the office of auditor, whether because of the resignation or removal of the incumbent auditor or because the term of office of the incumbent auditor has expired or is about to expire; or
- (d) the auditor receives a notice or otherwise learns of a meeting at which a resolution referred to in section 255 is to be proposed.

Circulating statement

(6) The cooperative must send a copy of the statements referred to in subsections (4) and (5) without delay to every person who is entitled to receive notice of a meeting referred to subsection (1) and to the Director.

Replacing auditor

(7) No person may accept appointment or consent to be appointed as auditor of a cooperative if the person is replacing an auditor who has resigned or been removed or whose term of office has expired or is about to expire until the person has requested and received from that auditor a written statement of the circumstances and the reasons why, in that auditor's opinion, the auditor is to be replaced.

Exception

(8) Despite subsection (7), a person otherwise qualified may accept appointment or consent to be appointed as auditor of a cooperative if, no later than fifteen days after making the request referred to in that subsection, the person does not receive a reply.

Effect of noncompliance

(9) Unless subsection (8) applies, an appointment as auditor of a cooperative of a person who has not complied with subsection (7) is null or void.

Examination

261. (1) An auditor of a cooperative must make any examination that is in the auditor's opinion necessary to enable the auditor to report in the manner that may be prescribed on the financial statements required by this Act to be placed before the members or shareholders, except any financial statements or parts of statements that relate to the period referred to in subparagraph 247(1)(a)(ii).

Reliance on other auditor

(2) Despite section 262, an auditor of a cooperative may reasonably rely on the report of an auditor of an entity the accounts of which are included in whole or in part in the financial statements of the cooperative.

Application

(3) Subsection (2) applies whether or not the financial statements of the cooperative reported on by the auditor are in consolidated form.

Right to information

262. (1) On the demand of an auditor of a cooperative, the present or former directors, officers, employees or agents or mandataries of the cooperative must provide any information and explanations, and access to any documents of the cooperative or any of its subsidiaries that are, in the opinion of the auditor, necessary to enable the auditor to make the examination and report required under section 261 and that they are reasonably able to provide.

Other information

(2) On the demand of the auditor of a cooperative, the directors must obtain from the present or former directors, officers, employees and agents or mandataries of any subsidiary of the cooperative the information and explanations that the present or former directors, officers, employees and agents or mandataries are reasonably able to provide and that are, in the auditor's opinion, necessary to enable the auditor to make the examination and report required under section 261 and provide them to the auditor.

No civil liability

(3) A person who in good faith makes an oral or written communication under subsection (1) or (2) is not liable in any civil action arising from having made the communication.

Audit committee

263. (1) Subject to subsection (2), a distributing cooperative must, and any other cooperative may, have an audit committee composed of not fewer than three directors, a majority of whom are not full-time officers or employees of the cooperative or any of its affiliates.

Exemption

(2) The Director may, on application of a cooperative, authorize the cooperative to dispense with an audit committee and the Director may, if satisfied that the members and shareholders will not be prejudiced, permit the cooperative to dispense with an audit committee on any reasonable conditions that the Director thinks fit.

Duty of committee

(3) An audit committee must review the financial statements of the cooperative before they are approved under section 250.

Auditor's attendance

(4) The auditor of a cooperative is entitled to receive notice of every meeting of the audit committee and, at the expense of the cooperative, to attend and be heard at the meeting. If requested to do so by a member of the audit committee, the auditor must attend every meeting of the committee held during the auditor's term of office.

Calling meeting

(5) The auditor of a cooperative or a member of the audit committee may call a meeting of the committee.

Notice of error

264. (1) A director or officer of a cooperative shall, without delay, notify the auditor and the audit committee, if any, of any error or misstatement of which the director or officer becomes aware in a financial statement that the auditor or a former auditor has reported on.

Errors in financial statements

(2) If the auditor or former auditor of a cooperative is notified or becomes aware of an error or misstatement in a financial statement on which the auditor or former auditor has reported, and if in their opinion the error or misstatement is material, the auditor or former auditor must inform each director accordingly.

Duty of directors

(3) When under subsection (2) the auditor or former auditor informs the directors of an error or misstatement in a financial statement, the directors shall

(a) prepare and issue revised financial statements; or

(b) otherwise inform the members and shareholders and, if the cooperative is one that is required to comply with section 252, inform the Director of the error or misstatement in the same manner as it informs the members.

Qualified privilege

265. Any oral or written statement or report made under this Act by the auditor or former auditor of a cooperative has qualified privilege.

PART 14**TRUST INDENTURES****INTERPRETATION**

266. The definitions in this section apply in this Part. **Definitions**

"event of default" means, in relation to a trust indenture, an event specified in the trust indenture on the occurrence of which the principal, interest and other money payable under the trust indenture become or may be declared to be payable before maturity, but the event is not an event of default until all the conditions set out in the trust indenture in connection with the giving of notice of the event have been satisfied or the period for giving the notice has elapsed.

"guarantor" means a person that has guaranteed an obligation of an issuer under a trust indenture.

"issuer" means a cooperative that has issued, is about to issue or is in the process of issuing debt obligations.

"trustee" means a person appointed as trustee under the terms of a trust indenture to which a cooperative is a party, and includes a successor trustee.

"trust indenture" means a deed, indenture or other document, including a supplement or amendment to such a document, made by a cooperative under which the cooperative issues debt obligations and in which a person is appointed as trustee for the holders of the debt obligations issued under it.

APPLICATION

Application

267. (1) This Part applies to a trust indenture if the debt obligations issued or to be issued under it are part of a distribution to the public.

Exemptions

(2) The Director may, in writing, exempt a trust indenture from the application of this Part if, in the Director's opinion, the trust indenture and the debt obligations under it are subject to a law of another jurisdiction that is substantially equivalent to the provisions of this Act relating to trust indentures.

GENERAL**Conflict of interests**

268. (1) No person may be appointed as trustee if there is a material conflict of interests between the person's role as trustee and any other role of the person.

Eliminating conflict of interests

(2) A trustee must, no later than ninety days after the trustee becomes aware that a material conflict of interests exists,

- (a) eliminate the conflict of interests; or
- (b) resign from office.

Validity despite conflict

269. A trust indenture, any debt obligations issued under it and the security interest effected by them are valid even if there is a material conflict of interests of the trustee.

Removal of trustee

270. If a trustee is appointed in contravention of subsection 268(1) or if a trustee contravenes subsection 268(2), any interested person may apply to a court for an order that the trustee be replaced, and the court may make an order on any terms that it thinks fit.

Trustee application

271. A trustee, or at least one of the trustees if more than one is appointed, must be a trust company incorporated under the laws of Canada or a province and authorized to carry on business as a trustee.

List of security holders

272. (1) A holder of debt obligations issued under a trust indenture may, on payment to the trustee of a reasonable fee and on delivery of a statutory declaration to the trustee, require the trustee to provide, no later than fifteen days after the delivery to the trustee of the statutory declaration, a list setting out the following information, as shown on the records maintained by the trustee on the day the statutory declaration is delivered to the trustee:

- (a) the names and addresses of the registered holders of the outstanding debt obligations;
- (b) the principal amount of outstanding debt obligations of each such holder; and
- (c) the total principal amount of debt obligations outstanding.

Duty of issuer

(2) On the demand of a trustee, the issuer must provide the trustee with the information required to enable the trustee to comply with subsection (1).

When applicant is entity

(3) If the person requiring the trustee to provide a list under subsection (1) is an entity, the statutory declaration required under that subsection may be made by a director or an officer of the entity or a person acting in a similar capacity.

Contents of statutory declaration

(4) The statutory declaration must state

- (a) the name and address of the person requiring the trustee to provide the list and, if the person is an entity, its address for service; and
- (b) that the list will not be used except as permitted by subsection (5).

Use of list

(5) No person shall use a list obtained under this section except in connection with

- (a) an effort to influence the voting of the holders of debt obligations;
- (b) an offer to acquire debt obligations; or
- (c) any other matter relating to the debt obligations or the affairs of the issuer or guarantor of them.

Compliance with trust indentures

273. (1) An issuer or a guarantor of a debt obligation issued or to be issued under a trust indenture must provide the trustee with evidence of compliance with the conditions in the trust indenture before undertaking

- (a) the issue, certification and delivery of debt obligations under the trust indenture;
- (b) the release, or release and substitution, of property subject to a security interest constituted by the trust indenture; or
- (c) the satisfaction and discharge of the trust indenture.

Compliance by issuer or guarantor

(2) On the demand of a trustee, the issuer or guarantor must provide the trustee with evidence of compliance with the conditions in the trust indenture by the issuer or guarantor in respect of any act to be done by the trustee at the request of the issuer or guarantor.

Evidence of compliance

(3) The following documents constitute evidence of compliance for the purposes of subsections (1) and (2):

- (a) a statutory declaration or certificate made by a director or an officer of the issuer or guarantor stating that the conditions referred to in subsections (1) and (2) have been complied with;
- (b) an opinion of legal counsel that the conditions of the trust indenture requiring review by legal counsel have been complied with, if the trust indenture requires compliance with conditions that are subject to review by legal counsel; and
- (c) an opinion or report of the auditors of the issuer or guarantor, or any other accountant that the trustee selects, that the conditions of the trust indenture have been complied with, if the trust indenture requires compliance with conditions that are subject to review by auditors or accountants.

Further evidence of compliance

(4) The evidence of compliance described in subsection (3) must include a statement by the person giving the evidence

- (a) declaring that the person has read and understands the conditions of the trust indenture referred to in subsections (1) and (2);
- (b) describing the nature and scope of the examination or investigation on which the person based the certificate, statement or opinion; and
- (c) declaring that the person has made any examination or investigation that the person believes necessary to enable the statements to be made or the opinions contained or expressed in the statement to be given.

Trustee may require evidence

274. (1) On request of a trustee, the issuer or guarantor must provide the trustee with evidence in any form that the trustee requires of compliance with any condition relating to any action required or permitted to be taken by the issuer or guarantor under the trust indenture.

Certificate of compliance

(2) At least once in each twelve month period beginning on the date of the trust indenture and at any other time on the demand of a trustee, the issuer or guarantor must provide the trustee with a certificate stating that the issuer or guarantor has complied with all requirements contained in the trust indenture that, if not complied with, would, with the giving of notice, lapse of time or otherwise, constitute an event of default, or, if there has been failure to so comply, giving particulars of the failure.

Notice of default

275. A trustee must, no later than thirty days after the trustee becomes aware of the occurrence of an event of default, give to the holders of debt obligations issued under a trust indenture notice of every event of default arising under the trust indenture and continuing at the time the notice is given, unless the trustee believes on reasonable grounds that it is in the best interests of the holders of the debt obligations to withhold the notice and so informs the issuer and guarantor in writing.

Duty

276. (1) In exercising powers and discharging duties, the trustee must

- (a) act honestly and in good faith with a view to the best interests of the holders of the debt obligations issued under the trust indenture; and
- (b) exercise the care, diligence and skill of a reasonably prudent trustee.

Reliance on statements

(2) Despite subsection (1), a trustee is not liable if the trustee relies in good faith on statements contained in a statutory declaration, certificate, opinion or report that complies with this Act or the trust indenture.

No exculpation

277. No term of a trust indenture or of an agreement between a trustee and the holders of debt obligations issued under the indenture or agreement or between the trustee and the issuer or guarantor operates to relieve a trustee from the duties imposed on the trustee by this Part.

PART 15

RECEIVERS AND RECEIVER-MANAGERS

Functions of receiver

278. (1) Subject to the rights of secured creditors, a receiver of any property of a cooperative may

- (a) receive the income from the property and pay the liabilities connected with it; and
- (b) realize the security interest of those on whose behalf the receiver is appointed.

If receiver not manager

(2) Despite subsection (1) but subject to any order that the court may make under section 282, a receiver who is not appointed manager of the cooperative may not carry on the business of the cooperative.

Functions of receiver manager

279. Despite section 278, if a receiver of a cooperative is also appointed manager of the cooperative, the receiver may carry on any business of the cooperative to protect the security interest of those on whose behalf he or she was appointed.

Directors' powers cease

280. If a receiver or receiver-manager is appointed by a court or pursuant to an instrument, no director shall exercise the directors' powers that the receiver or receiver-manager is authorized to exercise until the receiver or receiver manager is discharged.

If receiver appointed by court

281. (1) A receiver or receiver-manager appointed by a court must act in accordance with any directions of the court.

If receiver appointed pursuant to instrument

(2) A receiver or receiver-manager appointed pursuant to an instrument must act in accordance with the instrument and any direction that the court may make under section 282.

Duty

(3) A receiver or receiver-manager must

- (a) act honestly and in good faith; and
- (b) deal with any property of the cooperative in their possession or control in a commercially reasonable manner.

Directions given by court

282. A court may, on the application of a receiver or receiver-manager appointed by a court or pursuant to a document, or any other interested person, make any order giving directions on any matter relating to the duties of the receiver or receiver-manager appointed by it or pursuant to a document that it considers appropriate, including an order

- (a) appointing, replacing or discharging a receiver or receiver-manager and approving the accounts of the receiver or receiver-manager;
- (b) determining the notice to be given to any person or dispensing with notice to any person;
- (c) fixing the remuneration of the receiver or receiver-manager;
- (d) requiring the receiver or receiver-manager, or a person by or on behalf of whom the receiver or receiver-manager was appointed, to make good any default in connection with the receiver's or receiver-manager's custody or management of the property and business of the cooperative, or relieving a receiver or receiver-manager, or a person by or on behalf of whom a receiver or receiver-manager was appointed, from any default on any terms that the court considers appropriate;
- (e) confirming any act of the receiver or receiver-manager; and
- (f) giving directions on any other matter relating to the duties of the receiver or receiver-manager.

Required action

283. A receiver or receiver-manager must

- (a) take the property of the cooperative into custody and control in accordance with the court order or instrument pursuant to which the receiver or receiver-manager is appointed;
- (b) open and maintain a bank account as receiver or receiver-manager of the cooperative for the money of the cooperative coming under their control;
- (c) keep detailed accounts of all transactions carried out as receiver or receiver-manager;
- (d) keep accounts of the administration as receiver or receiver-manager and cause them to be made available during usual business hours for inspection by the directors;
- (e) prepare, at least once in every six month period after the day of appointment, financial statements of the administration, as far as is feasible, in the form required by section 247;
- (f) on completion of their duties, render a final account of the administration in the form that the receiver or receiver-manager has adopted for preparation of interim accounts under paragraph (e); and
- (g) if section 252 would otherwise apply, file with the Director a copy of any financial statement mentioned in paragraph (e) and any final account mentioned in paragraph (f) not later than fifteen days after it is prepared or rendered.

**PART 16 PARTIE 16
FUNDAMENTAL CHANGES****Definition of “common share”**

284. For the purposes of this Part, “common share” means a share in a body corporate, the rights of the holders of which are equal in all respects, including equal rights to

- (a) receive dividends declared by the body corporate on the shares; and
- (b) receive the remaining property of the body corporate on dissolution.

Continuance

285. (1) A body corporate incorporated or continued otherwise than under this Act may, if so authorized by its governing legislation, apply to the Director for a certificate of continuance under this Act if the body corporate

- (a) satisfies, or by its articles of continuance would satisfy, the requirements for incorporation as a cooperative under this Act;
- (b) is organized and operated and carries on its business on a cooperative basis or, by its articles of continuance, causes the body corporate to be organized and operated and to carry on its business on a cooperative basis; and
- (c) has a capital and corporate structure that, if set out in its articles and by-laws, would meet the requirements of this Act.

Prorogation Continuance for the purpose of amalgamation

(2) A body corporate incorporated or continued otherwise than under this Act may, if so authorized by its governing legislation, apply to the Director for a certificate of continuance and a certificate of amalgamation under this Act if the body corporate

- (a) proposes to be continued under this section for the purpose of amalgamating with another body corporate in compliance with this Act and does, or will after the amalgamation, satisfy the requirements for incorporation as a cooperative under this Act;
- (b) is organized and operated and carries on its business on a cooperative basis or, after the amalgamation, will be organized and operated and will carry on its business on a cooperative basis; and
- (c) has a capital and corporate structure —or after the amalgamation will have a capital and corporate structure — that, if set out in its articles and by-laws, would meet the requirements of this Act.

Amendments in articles of continuance

(3) A body corporate that applies for continuance under subsection (1) or (2) may, without so stating in its articles of continuance, effect by those articles any amendment to its constating documents if the amendment is one that a cooperative incorporated under this Act may make to its articles.

Articles of continuance

(4) If a body corporate wishes to apply for continuance under subsection (1), articles of continuance in the form that the Director fixes must be sent to the Director, together with any information that the Director may require and a declaration of the directors

- (a) that after continuance the cooperative will be organized and operated and will carry on business on a cooperative basis;
- (b) in the case of a cooperative to which Part 20 applies, that after continuance the cooperative will be in compliance with Part 20; and

(c) in the case of a cooperative to which Part 21 applies, that after continuance the cooperative will be in compliance with Part 21.

Articles of continuance and articles of amalgamation

(5) If a body corporate wishes to apply for continuance under subsection (2), articles of continuance — and articles of amalgamation — in the form that the Director fixes must be sent to the Director, together with an amalgamation agreement containing the particulars set out in section 296, any information that the Director may require and a declaration of the directors

(a) that after amalgamation the cooperative will be organized and operated and will carry on business on a cooperative basis;

(b) in the case of a cooperative to which Part 20 applies, that after amalgamation the cooperative will be in compliance with Part 20; and

(c) in the case of a cooperative to which Part 21 applies, that after amalgamation the cooperative will be in compliance with Part 21.

Certificate of continuance

(6) The Director must issue

(a) a certificate of continuance, on receipt of the articles of continuance and the declaration required by subsection (4), if she or he is satisfied that the requirements for incorporation have been met; or

(b) a certificate of continuance and a certificate of amalgamation, on receipt of the articles of continuance, the articles of amalgamation, the amalgamation agreement and the declaration required by subsection (5), if she or he is satisfied that the requirements for incorporation and the requirements for amalgamation have been met.

Reliance

(7) For the purpose of subsection (6), the Director may rely on the articles and the declarations.

Effect of certificate

(8) On the date shown in the certificate of continuance,

(a) the body corporate becomes a cooperative to which this Act applies as if it had been incorporated under this Act;

(b) the articles of continuance are deemed to be the articles of incorporation of the continued cooperative; and

(c) the certificate of continuance is deemed to be the certificate of incorporation of the continued cooperative.

Copy of certificate

(9) The Director must send, without delay after the certificate of continuance is issued, a copy of that certificate to the appropriate official or public body charged with the administration of the legislation under which continuance under this Act was authorized.

Rights preserved

(10) When a body corporate is continued as a cooperative under this Act,

(a) the property of the body corporate continues to be the property of the cooperative;

(b) the cooperative continues to be liable for the obligations of the body corporate;

(c) an existing cause of action, claim or liability to prosecution is unaffected;

(d) a civil, criminal, administrative, investigative or other action or proceeding pending by or against the body corporate may be continued to be prosecuted by or against the cooperative; and

(e) a conviction against, or ruling, order or judgment in favour of or against, the body corporate may be enforced by or against the cooperative.

Membership shares

(11) When a body corporate is continued as a cooperative under this Act,

(a) its common shares are deemed to be membership shares to which are attached the rights, privileges and restrictions set out in this Act and the articles;

(b) the holders of the common shares of the body corporate are deemed to be the members of the cooperative; and

(c) any agreement made before continuance under which the holders of any common shares of the body corporate have agreed to vote those shares in a manner provided in the agreement is of no effect.

Issued shares

(12) Subject to section 182,

(a) a share of a body corporate issued before it was continued under this Act is deemed to have been issued in compliance with this Act and with the provisions of the articles of continuance, irrespective of whether the share is fully paid and of any designation, right, privilege, restriction or condition set out on or referred to in the certificate representing the share;

(b) continuance under this Act does not deprive a holder of any right or privilege that the holder claims under, or relieve the holder of any liability in respect of, an issued share; and

(c) shares carry voting rights only to the extent permitted by this Act.

Conversion privilege

(13) If a cooperative continued under this Act had, before it was so continued, issued a share certificate in registered form that is convertible to bearer form, the cooperative may, if a holder of such a share certificate exercises the conversion privilege attached to the certificate, issue a share certificate in bearer form for the same number of shares to the holder.

Definition of “share”

(14) For the purposes of subsections (12) and (13), “share” includes a document referred to in any of subsections 142(1) to (3), a share warrant within the meaning of the *Canada Corporations Act*, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970, or a like instrument.

Continuance — other federal acts

286. (1) A cooperative, other than one to which Part 20 or 21 applies, with membership share capital may, on special resolution of the members and, if the cooperative has issued investment shares, on a separate special resolution of the shareholders of each class, apply for continuance under the *Canada Business Corporations Act*, the *Bank Act*, the *Insurance Companies Act*, the *Trust and Loan Companies Act* or the *Cooperative Credit Associations Act*. On the date specified in the document evidencing the continuance, that Act applies and this Act ceases to apply to the body corporate continued under that Act.

Result of continuance

(2) On a continuance under subsection (1), the membership shares of a cooperative are deemed to be common shares without a par value.

Withdrawal of application

(3) If a special resolution authorizing the application for continuance referred to in subsection (1) so states, the directors may, without further approval of the members or shareholders, withdraw the application before it is acted on.

Certificate of discontinuance

(4) On receipt of a notice satisfactory to the Director that the cooperative has been continued under this section, the Director must file the notice and issue a certificate of discontinuance in the form that the Director fixes.

Date of discontinuance

(5) This Act ceases to apply to the cooperative on the date shown in the certificate of discontinuance.

Export

287. (1) Subject to subsection (6) and Parts 20 and 21, a cooperative, on a special resolution of the members and, if the cooperative has issued investment shares, on a separate special resolution of the shareholders of each class, may, if it establishes to the satisfaction of the Director by a declaration of the directors that its proposed continuance in another jurisdiction would not have an effect set out in any of paragraphs (a) to (d), apply to the appropriate official or public body of another jurisdiction requesting that the cooperative be continued as if it had been incorporated under the laws of that other jurisdiction, namely, that the continuance would not

(a) adversely affect the members, creditors or shareholders;

(b) result in the cooperative carrying on its business and affairs in a manner not consistent with carrying on business on a cooperative basis;

(c) result in a cooperative to which Part 20 applies carrying on its business or affairs in a manner not consistent with Part 20; or

(d) result in a cooperative to which Part 21 applies carrying on its business or affairs in a manner not consistent with Part 21.

Notice of meeting

(2) A notice of a meeting of the cooperative to authorize a continuance under this section must be sent to each member and shareholder and state that a dissenting member or shareholder is entitled to the benefit of section 302, but failure to make that statement does not invalidate a discontinuance under this Act.

Abandonment of application

(3) The directors may, if authorized by the special resolution at the time of approving an application for continuance under this section, abandon the application without further approval of the members or shareholders.

Certificate of discontinuance

(4) On receipt of a notice satisfactory to the Director that the cooperative has been continued under the laws of another jurisdiction, the Director must file the notice and issue a certificate of discontinuance in the form that the Director fixes.

Date of discontinuance

(5) This Act ceases to apply to the cooperative on the date shown in the certificate of discontinuance.

Requirements for continuance

(6) A cooperative may not be continued as a body corporate under the laws of another jurisdiction unless those laws provide that

- (a) its property continues to be the property of the body corporate;
- (b) the body corporate continues to be liable for the obligations of the cooperative;
- (c) an existing cause of action, claim or liability to prosecution is unaffected;
- (d) a civil, criminal, administrative, investigative or other action or proceeding pending by or against the cooperative may be continued to be prosecuted by or against the body corporate; and
- (e) a conviction against, or ruling, order or judgment in favour of or against, the cooperative may be enforced by or against the body corporate.

Shareholders right to vote

288. Each investment share carries the right to vote on a continuance under section 286 or 287, whether or not it otherwise carries the right to vote.

Amendment of articles

289. (1) Subject to subsections (3) and 130(2) and sections 134, 290 and 291, the articles of a cooperative may be amended by a special resolution to

- (a) change its name;
- (b) change the place in which its registered office is situated;
- (c) add, change or remove a restriction on the business or businesses that the cooperative may carry on;
- (d) convert par-value membership shares into no-par-value membership shares and provide for a maximum number of membership shares that may be issued;
- (e) change a price or formula at which membership shares may be issued or redeemed or otherwise acquired by the cooperative;
- (f) add, change or remove restrictions on membership;
- (g) convert a cooperative that is incorporated without membership shares to a cooperative with membership shares and provide for membership shares with a par value and their par value or membership shares without a par value and the maximum number of membership shares that may be issued;
- (h) convert a cooperative with membership shares into a cooperative without membership shares and provide for the conversion of membership shares into member loans;
- (i) change any maximum number of shares that the cooperative is authorized to issue;
- (j) reduce or increase its stated capital, if its stated capital is set out in the articles;
- (k) create investment shares or new classes of investment shares;
- (l) change the designation of all or any of its investment shares and add, change or remove any rights, privileges, restrictions and conditions, including rights to accrued dividends, in respect of all or any of its investment shares, whether issued or unissued;
- (m) change the investment shares of any class or series, whether issued or unissued, into a different number of investment shares of the same class or series or into the same or a different number of investment shares of other classes or series;
- (n) divide a class of investment shares, whether issued or unissued, into series and fix the number of investment shares in each series and the rights, privileges, restrictions and conditions of them;

- (o) authorize the directors to divide any class of unissued investment shares into series and fix the number of investment shares in each series and the rights, privileges, restrictions and conditions of them;
- (p) authorize the directors to change the rights, privileges, restrictions and conditions attached to unissued investment shares of any series;
- (q) revoke, diminish or enlarge any authority conferred under paragraphs (o) and (p);
- (r) increase or decrease the number of directors or the minimum or maximum number of directors, subject to section 76 and subsection 124(4);
- (s) add, change or remove restrictions on the issue, transfer or ownership of investment shares; or
- (t) add, change or remove any other provision that is permitted by this Act to be set out in the articles.

Termination

(2) The directors may, if authorized by the special resolution effecting an amendment under this section, revoke the resolution before it is acted on without further approval of the members or shareholders.

Restriction on amendment

(3) If the name of a cooperative is indicative of a restriction on the business that may be carried on by it, the articles of the cooperative may not be amended to remove that restriction unless its name is also amended.

Cooperative basis

(4) An amendment to the articles of a cooperative may not be made if it would result in the cooperative not being organized or operated or not carrying on business on a cooperative basis or, if applicable, result in the cooperative not being in compliance with Part 20 or 21.

Proposal to amend

290. (1) Subject to subsection (2), a person referred to in subsection 58(2) or (2.1) may make a proposal to amend the articles and section 58 applies, with any modifications that the circumstances require, to any meeting of the cooperative at which the proposal is to be considered.

Notice of amendment

(2) Notice of the meeting of a cooperative at which a proposal to amend the articles is to be considered must set out the proposed amendment and, if applicable, state that a dissenting member or a dissenting shareholder is entitled to the benefit of section 302, but failure to make that statement does not invalidate an amendment.

Separate resolutions

(3) A proposed amendment to the articles referred to in subsection (1) is adopted when approved by a special resolution of the members and, subject to section 134, if the cooperative has issued investment shares, by a separate special resolution of the shareholders or the class or series thereof.

Right to vote

(4) Each investment share that is affected by a proposed amendment to the articles carries the right to vote in accordance with section 134.

Delivery of articles

291. (1) Subject to any revocation under subsection 130(5) or 289(2), after an amendment has been adopted, articles of amendment must be sent to the Director in the form that the Director fixes, together with any information that the Director may require and a declaration of the directors

- (a) that the cooperative will be organized and operated and will carry on business on a cooperative basis;
- (b) if the cooperative is one to which Part 20 applies, that the cooperative will comply with Part 20; and
- (c) if the cooperative is one to which Part 21 applies, that the cooperative will comply with Part 21.

Reduction of stated capital

(2) If an amendment effects or requires a reduction of stated capital, subsections 151(2) and (5) apply.

Certificate of amendment

292. On receipt of articles of amendment and the declaration required by subsection 291(1), the Director must issue a certificate of amendment.

Effect of certificate

293. (1) An amendment becomes effective on the date shown in the certificate of amendment and the articles are amended accordingly.

Existing claims not affected

(2) No amendment to the articles affects an existing cause of action or claim or liability to prosecution in favour of or against the cooperative or its directors or officers, or any civil, criminal, administrative, investigative or other action or proceeding to which a cooperative or its directors or officers are a party.

Restated articles

294. (1) The directors may at any time, and must when reasonably so directed by the Director, restate the articles of incorporation.

Sent to Director

(2) Restated articles of incorporation in the form that the Director fixes must be sent to the Director.

Restated certificate

(3) On receipt of restated articles of incorporation, the Director must issue a restated certificate of incorporation.

Effective date

(4) Restated articles of incorporation are effective on the date shown in the restated certificate of incorporation.

Amalgamation

295. Two or more cooperatives, including holding and subsidiary cooperatives, may amalgamate and continue as one cooperative, provided that the amalgamation agreement sets out a capital and corporate structure for the amalgamated cooperative that is one that would meet the requirements for a cooperative to be incorporated under this Act.

Amalgamation agreement

296. (1) Each cooperative proposing to amalgamate must enter into an agreement setting out the terms and means of effecting the amalgamation and, in particular, setting out

(a) the provisions that are required to be included in articles of incorporation under section 11;

(b) the name and address of each proposed director of the amalgamated cooperative;

(c) the manner in which the shares of each amalgamating cooperative are to be converted into membership shares of the amalgamated cooperative and, if applicable, investment shares or other securities of the amalgamated cooperative;

(d) if any share of an amalgamating cooperative is not to be converted into shares or securities of the amalgamated cooperative, the amount of money or securities of a cooperative that the holders of those shares are to receive in addition to or instead of shares or securities of the amalgamated cooperative;

(e) the manner of payment of money instead of the issue of fractional shares of the amalgamated cooperative or of any other body corporate the securities of which are to be received in the amalgamation;

(f) whether the by-laws of the amalgamated cooperative are to be those of one of the amalgamating cooperatives, and if not, a copy of the proposed by-laws; and

(g) details of any arrangements necessary to perfect the amalgamation and to provide for the subsequent management and operation of the amalgamated cooperative.

Cancellation

(2) If shares of one of the amalgamating cooperatives are held by or on behalf of another of the amalgamating cooperatives, the amalgamation agreement must provide for the cancellation of the shares when the amalgamation becomes effective without any repayment of capital in respect of them, and no provision may be made in the agreement for the conversion of those shares into shares of the amalgamated cooperative.

Approval

297. (1) The directors of each amalgamating cooperative must submit the amalgamation agreement for approval to a meeting of the members of each amalgamating cooperative

and to a meeting of the shareholders of each amalgamating cooperative and, subject to subsection (5), to the holders of each class or series of those investment shares.

Notice of meeting

(2) A notice of a meeting of members or shareholders complying with section 52 must be sent in accordance with that section to each member and shareholder of each amalgamating cooperative and must

(a) include or be accompanied by a copy or summary of the amalgamation agreement; and

(b) state that a dissenting member or shareholder is entitled to the benefit of section 302.

Failure to make statement

(3) Failure to make the statement referred to in paragraph (2)(b) does not invalidate an amalgamation.

Right to vote

(4) Each investment share carries the right to vote with respect to an amalgamation agreement, whether or not it otherwise carries the right to vote.

Class vote

(5) The holders of investment shares of a class or series are entitled to vote separately as a class or series in respect of the amalgamation agreement if it contains a provision that, if contained in a proposed amendment to the articles, would entitle them to vote as a class or series under subsection 290(4).

Approval

(6) Subject to subsection (5), an amalgamation agreement is adopted when the members of each amalgamating cooperative and, if any of the amalgamating cooperatives has issued investment shares, their shareholders, have approved the amalgamation agreement by separate special resolutions.

Termination

(7) An amalgamation agreement may provide that at any time before the issue of a certificate of amalgamation the agreement may be terminated by the directors of an amalgamating cooperative, even if the agreement has been approved by the members and shareholders of all or any of the amalgamating cooperatives.

Vertical shortform amalgamation

298. (1) A cooperative that is a holding cooperative may amalgamate with one or more of its wholly owned subsidiary cooperatives. The cooperative and subsidiaries continue as one cooperative without complying with sections 295 to 297 if

(a) the amalgamation is approved by a resolution of the directors of each amalgamating cooperative; and

(b) the resolutions provide that

(i) the shares of each subsidiary be cancelled without any repayment of capital in respect of them,

(ii) except as may be prescribed, the articles of amalgamation be the same as the articles of the amalgamating holding cooperative, and

(iii) no shares or securities may be issued by the amalgamated cooperative in connection with the amalgamation.

Horizontal short-form amalgamation

(2) Two or more wholly owned subsidiary cooperatives of a holding entity may amalgamate and continue as one cooperative without complying with sections 295 to 297 if

(a) the amalgamation is approved by a resolution of the directors of each amalgamating cooperative; and

(b) the resolutions provide that

(i) the shares of all but one of the amalgamating subsidiaries be cancelled without any repayment of capital in respect of them,

(ii) except as may be prescribed, the articles of amalgamation be the same as the articles of the amalgamating subsidiary cooperative whose shares are not cancelled, and

(iii) the stated capital of the amalgamating subsidiaries whose shares are cancelled are added to the stated capital of the amalgamating subsidiary whose shares are not cancelled.

Change of name

(3) Despite subparagraph (2)(b)(ii) and section 289, the directors of the holding entity of the subsidiaries referred to in subsection (2) may, by resolution, approve a new name for the amalgamated cooperative, so long as, in a case to which Part 20 or 21 applies, the name would comply with the provisions of the applicable Part.

Sending of articles

299. (1) After an amalgamation has been approved under section 297 or 298, articles of amalgamation in the form that the Director fixes must be sent to the Director, together with a notice of registered office and a notice of the directors of the amalgamated cooperative.

Attached declarations

(2) A declaration of the directors of each amalgamating cooperative must be attached to the articles of amalgamation and must establish

(a) that the amalgamated cooperative will be organized and operated and will carry on business on a cooperative basis;

(b) if the cooperative is one to which Part 20 applies, that the amalgamated cooperative will comply with Part 20;

(c) if the cooperative is one to which Part 21 applies, that the cooperative will comply with Part 21;

(d) that there are reasonable grounds to believe that

(i) each amalgamating cooperative is, and the amalgamated cooperative will be, able to pay its liabilities as they become due, and

(ii) the realizable value of the amalgamated cooperative's assets will not be less than the total of its liabilities and stated capital of all classes; and

(e) that there are reasonable grounds to believe that

(i) no creditor will be prejudiced by the amalgamation, or

(ii) adequate notice has been given to all known creditors of the amalgamating cooperatives and no creditor objects to the amalgamation otherwise than on grounds that are frivolous or vexatious.

Adequate notice

(3) For the purpose of subparagraph (2)(e)(ii), adequate notice is given if

(a) a notice in writing is sent to each known creditor who has a claim against any of the amalgamating cooperatives that exceeds one thousand dollars;

(b) a notice in writing is published once in a newspaper published or distributed in the place where each amalgamating cooperative has its registered office and reasonable notice is given in each province where the cooperative carries on business; and

(c) each notice states that the cooperative intends to amalgamate with one or more specified cooperatives in accordance with this Act and that a creditor of the cooperative may object to the amalgamation not later than thirty days after the date of the notice.

Certificate of amalgamation

(4) On receipt of articles of amalgamation and the declarations required by subsection (2), the Director must issue a certificate of amalgamation if the Director is satisfied that

(a) the articles are in accordance with section 11 and, if applicable, section 353 and subsection 359(2);

(b) the cooperative will be organized and operated and will carry on business on a cooperative basis;

(c) the things described in paragraphs (2)(d) and (e) are true; and

(d) if applicable, Part 20 or 21 has been complied with.

Reliance on certificate

(5) For the purposes of paragraphs (4)(b) to (d), the Director may rely on the articles and the declarations required by subsection (2).

Effect of certificate

300. On the date shown in a certificate of amalgamation,

(a) the amalgamation of the amalgamating cooperatives and their continuance as one cooperative becomes effective;

(b) the property of each amalgamating cooperative continues to be the property of the amalgamated cooperative;

(c) the amalgamated cooperative continues to be liable for the obligations of each amalgamating cooperative;

(d) an existing cause of action, claim or liability to prosecute is unaffected;

(e) a civil, criminal, administrative, investigative or other action or proceeding pending by or against an amalgamating cooperative may be continued to be prosecuted by or against the amalgamated cooperative;

- (f) a conviction against, or ruling, order or judgment in favour of or against, an amalgamating cooperative may be enforced by or against the amalgamated cooperative; and
- (g) the articles of amalgamation are deemed to be the articles of incorporation of the amalgamated cooperative and the certificate of amalgamation is deemed to be the certificate of incorporation of the amalgamated cooperative.

Extraordinary disposition

301. (1) A sale, lease or exchange of all or substantially all of the property of a cooperative, other than in the ordinary course of business, requires the approval of the members and shareholders in accordance with subsections (2) to (7).

Notice

(2) A notice of meeting complying with section 52 must be sent to all members and shareholders and must

- (a) include a copy or summary of the proposed agreement of sale, lease or exchange; and
- (b) state that a dissenting member or shareholder is entitled to bring section 302 into effect.

Failure to make statement

(3) Failure to make the statement referred to in paragraph (2)(b) does not invalidate the disposition.

Right to vote

(4) Each investment share carries the right to vote with respect to an extraordinary disposition, whether or not it otherwise carries the right to vote.

Class vote

(5) The holders of investment shares of a class or series are entitled to vote separately as a class or series if the class or series is affected differently from another class or series by the proposed disposition.

Approval

(6) Subject to subsection (5), a disposition is authorized when approved by a special resolution of the members and, if the cooperative has issued investment shares, by a separate special resolution of the shareholders of each class or series. The special resolution may authorize the directors to fix any terms or conditions of a sale, lease or exchange.

Right to dissent

302. (1) Unless section 303 or 340 applies, a member or shareholder may dissent if a cooperative resolves to

- (a) amend its articles in a manner that adversely affects a member's membership rights or that affects the rights of a shareholder in respect of an investment share;
- (b) amend its articles to add, change or remove a restriction on the business the cooperative may carry on;
- (c) amalgamate other than under section 298;
- (d) apply for continuance under section 286 or 287; or
- (e) sell, lease or exchange all or substantially all of its property under section 301.

Further right

(2) A holder of investment shares of any class or series of shares entitled to vote under section 134 may dissent if the cooperative resolves to amend its articles in a manner described in that section.

Dissent

(3) A dissenting member or shareholder must send to the cooperative, at or before any meeting of members or meeting of shareholders at which a resolution referred to in subsection (1) or (2) is to be voted on, a written objection to the resolution, unless the cooperative did not give notice to the member or shareholder of the purpose of the meeting and of the right to dissent.

Effect of dissent

(4) A dissenting member is deemed to have given notice of intent to withdraw from the cooperative under this section if the resolution is passed. A dissenting shareholder is deemed to have claimed under this section on behalf of all investment shares in a class held by the shareholder if the resolution is passed.

Notice of resolution

(5) The cooperative must, not later than ten days after the members and shareholders have adopted the resolution, send to each dissenting member and shareholder notice that the resolution has been adopted.

Notice

(6) A dissenting member or shareholder may, no later than twenty-one days after receiving the notice under subsection (5), or if no notice is received, no later than twenty-one days after learning that the resolution was adopted, send to the cooperative a written notice that contains

(a) the person's name and address;

(b) if the person is a shareholder, the number of investment shares and the class or classes of the shares held; and

(c) a demand

(i) in the case of a dissenting member, for withdrawal from the cooperative, for payment of all membership shares at their fair value and for repayment of any other interest held by the member in the cooperative, fair value being determined on the day before the resolution was adopted, and

(ii) in the case of a dissenting shareholder, for payment of the fair market value of all investment shares of each class held by the shareholder, fair market value being determined on the day before the resolution was adopted.

Rights of members

(7) Despite the articles, the by-laws or section 39, a dissenting member who has sent a demand under subsection (6) does not have the right to vote at a meeting of the cooperative after having sent the notice. Despite the articles, the by-laws or section 146, the member is entitled to be paid the value of their membership shares in the cooperative in accordance with this section or a court order under subsection 304(4).

Share certificates

(8) A dissenting shareholder must, not later than thirty days after sending the notice under subsection (6), send the certificates representing the investment shares held in the cooperative to the cooperative or to its transfer agent.

Forfeiture

(9) A dissenting shareholder who fails to comply with subsection (8) has no right to claim under this section.

(10) Each certificate sent under subsection (8) must be endorsed by the cooperative or its transfer agent with a notice that the holder is a dissenting shareholder and must be returned to the shareholder.

Suspension of rights

(11) On sending a notice under subsection (6), a member's rights as a member, and a shareholder's rights as a shareholder, other than the right to be paid in accordance with subsection (6), are suspended.

Reinstatement

(12) The rights of the member or shareholder are reinstated as of the date of the notice referred to in subsection (6) if

(a) the dissenting member or shareholder withdraws the demand made under paragraph (6)(c) before the cooperative makes an offer under subsection (13);

(b) the cooperative fails to make an offer in accordance with subsection (13) and the dissenting member or shareholder withdraws their notice; or

(c) the directors revoke a resolution to amend the articles under subsection 289(2), terminate an amalgamation agreement under subsection 297(7) or an application for continuance under subsection 286(3) or 287(3), or abandon a sale, lease or exchange under subsection 301(7).

Offer to pay

(13) A cooperative must, not later than seven days after the later of the day on which the resolution under subsection (1) or (2) is effective or the day the cooperative receives the notice under subsection (6), send to each dissenting member or shareholder

(a) a written offer to pay the amount determined in accordance with subsection (6) and a statement showing how the amount was calculated; or

(b) a statement that subsection (23) or (24) applies.

Same terms

(14) Every offer for membership shares must be on the same terms and every offer for the same class or series of investment shares must be on the same terms.

Payment

(15) Subject to subsection (23) or (24), a cooperative must pay to the dissenting member or shareholder the amount offered under subsection (13) no later than ten days after acceptance, but the offer lapses if it is not accepted within thirty days after being made.

Application to court

(16) If the dissenting member or shareholder fails to accept the offer, the cooperative may, not later than fifty days after the resolution is approved or any later time that the court may allow, apply to the court to fix the amount to be paid under subsection (6).

If no application

(17) If the cooperative fails to make an application under subsection (16) — or fails to make an offer under subsection (13) within the time set out in subsection (16) — a dissenting member or shareholder may, no later than twenty days after the end of that period, make an application for the same purpose.

Venue

(18) An application under subsection (16) or (17) may be made to the court having jurisdiction where the registered office of the cooperative is located or to a court having jurisdiction where the dissenting member or shareholder resides if the cooperative carries on business in that jurisdiction.

Parties

(19) On an application under subsection (16) or (17), all dissenting members and shareholders whose shares or other interests have not been purchased are joined as parties and the cooperative must notify them, advising each of them of the right to participate in, and the consequences of, the application. No dissenting member or shareholder is required to give security for costs in the application.

Powers of court

(20) On an application under subsection (16) or (17), the court must determine who is a dissenting member or shareholder and fix the amount to be paid under subsection (6) and may make any further order that the court thinks fit.

Notice if subsection (23) or (24) applies

(21) If subsection (23) or (24) applies, the cooperative must, no later than ten days after the determination under subsection (20), advise each dissenting member and shareholder that subsection (23) or (24) applies.

Effect if subsection (23) or (24) applies

(22) If subsection (23) or (24) applies,

(a) a dissenting member or shareholder, not

later than thirty days after the notice under subsection (21), may by notice to the cooperative withdraw the notice of demand, in which case the member is reinstated as a member or the shareholder is reinstated as a shareholder; or

(b) if no notice is given to the cooperative under paragraph (a), the dissenting member or shareholder retains the status of a claimant to be paid as soon as the cooperative may lawfully do so or, in liquidation, to be paid in priority to the remaining members and shareholders.

Limitation

(23) The cooperative may not make a payment to a dissenting member or shareholder under this section if there are reasonable grounds to believe that after that payment the cooperative would be in breach of section 149.

Restriction Installments

(24) If the directors determine that the payment to a dissenting member as member would adversely affect the financial well-being of the cooperative, payment may be made at the times that the directors determine, over a period that begins on the day on which the resolution was adopted and ends not later than

(a) five years after that day; or

(b) any other day that is not more than ten years after the day on which the resolution was adopted and that is specified in the articles of the cooperative.

Interest

(25) Payments under subsection (24) shall bear interest at the rates prescribed by or calculated in accordance with the regulations.

Reorganization

303. (1) This section applies to a reorganization made pursuant to a court order under section 340, a court order approving a proposal under the *Bankruptcy and Insolvency Act* or a court order that affects the rights among the cooperative, its members, shareholders and creditors made under any other Act of Parliament.

Limitation

- (2) No court order for reorganization may result in a cooperative
- (a) no longer being organized or operating or carrying on business on a cooperative basis;
 - (b) if the cooperative is one to which Part 20 applies, not complying with Part 20; or
 - (c) if the cooperative is one to which Part 21 applies, not complying with Part 21.

Powers of court

(3) If a cooperative is subject to an order referred to in subsection (1), its articles may be amended by the order to effect any changes that might lawfully be made by an amendment under this Act.

Further powers

- (4) If a court makes an order referred to in subsection (1), the court may also
- (a) authorize the issue of debt obligations that if held by members may be converted to membership shares or investment shares and otherwise may be converted to investment shares and fix the terms of them; and
 - (b) appoint directors in place of or in addition to all or any of the directors then in office.

Articles of reorganization

(5) After an order referred to in subsection (1) has been made, articles of reorganization in the form that the Director fixes, together with, if applicable, notice of registered office and notice of change of directors, must be sent to the Director.

Certificate of amendment

(6) On receipt of articles of reorganization, the Director must issue a certificate of amendment.

Effect of certificate

(7) A reorganization becomes effective on the date shown on the certificate of amendment and the articles of incorporation are amended accordingly.

No dissent

(8) No member or shareholder is entitled to dissent under section 302 if an amendment to the articles of incorporation is effected under this section.

Definition of “arrangement”

- 304.** (1) In this section, “arrangement” includes
- (a) a continuance for the purpose of amalgamation;
 - (b) an amendment to the articles of a cooperative;
 - (c) an amalgamation of two or more cooperatives;
 - (d) an amalgamation of a body corporate with a cooperative that results in an amalgamated cooperative;
 - (e) an amalgamation of two bodies corporate to become a cooperative;
 - (f) a division of the business carried on by a cooperative;
 - (g) a transfer of all or substantially all of the property of a cooperative to another body corporate in exchange for property, money or securities of the body corporate;
 - (h) an exchange of securities of a cooperative for property, money or other securities of the cooperative or property, money or securities of another body corporate, subject to the issue or transfer of membership shares to members;
 - (i) a liquidation and dissolution of a cooperative; and
 - (j) any combination of the events set out in paragraphs (a) to (i).

When cooperative insolvent

- (2) For the purposes of this section, a cooperative is insolvent
- (a) when it is unable to pay its liabilities as they become due; or
 - (b) if the realizable value of its assets is less than the total of its liabilities and the stated capital of all membership shares and investment shares.

Application to court for approval of arrangement

(3) If it is not feasible for a cooperative that is not insolvent to effect a fundamental change in the nature of an arrangement under any other provision of this Act, the cooperative may apply to a court for an order approving an arrangement proposed by the cooperative.

Powers of court

(4) In connection with an application under this section, the court may make any order it thinks fit, including an order

- (a) respecting the giving of notice of the application, subject to subsection (6);
- (b) respecting the representation of the interests of members or shareholders;
- (c) requiring meetings of the cooperative to be held;
- (d) permitting a member or shareholder to dissent under section 302; and
- (e) approving an arrangement in any manner the court may direct.

Limitation

(5) The court may not make an order that would result in the cooperative

- (a) no longer being organized or operating or carrying on business on a cooperative basis;
- (b) if the cooperative is one to which Part 20 applies, not complying with Part 20; and
- (c) if the cooperative is one to which Part 21 applies, not complying with Part 21.

Notice to Director

(6) Notice of an application under subsection (4) must be given to the Director and the Director is entitled to appear and be heard in person or by counsel.

Articles of arrangement

(7) If an order is made under paragraph (4)(e), articles of arrangement in the form that the Director fixes, together with, if applicable, notice of registered office and notice of change of directors, must be sent to the Director.

Certificate of arrangement

305. (1) On receipt of articles of arrangement, the Director must issue a certificate of arrangement.

Effect of certificate

(2) An arrangement becomes effective on the date shown in the certificate of arrangement.

PART 17

LIQUIDATION AND DISSOLUTION

Definition of “court”

306. In this Part, “court” means a court having jurisdiction in the place where the cooperative has its registered office.

Application of Part

307. (1) This Part, other than sections 308 and 311, does not apply to a cooperative that is an insolvent person or a bankrupt as those terms are defined in subsection 2(1) of the *Bankruptcy and Insolvency Act*.

Staying of proceedings

(2) Any proceedings taken under this Part to dissolve or to liquidate and dissolve a cooperative are stayed if the cooperative is at any time found, in a proceeding under the *Bankruptcy and Insolvency Act*, to be an insolvent person as defined in that Act.

Revival

308. (1) When a cooperative is dissolved under this Part, any interested person, or any person who would be an interested person if a certificate of revival is issued under this section, may apply to the Director to have the cooperative revived under this Act.

Articles of revival

(2) Articles of revival in the form that the Director fixes must be sent to the Director, together with a declaration of the directors to the same effect as one referred to in paragraph 10(d) and, if applicable, in paragraph 10(e).

Certificate of revival

(3) On receipt of articles of revival, the Director must issue a certificate of revival, unless the Director is of the opinion that issuing the certificate

- (a) would result in the cooperative

- (i) no longer being organized or operating or carrying on business on a cooperative basis,
- (ii) if the cooperative is one to which Part 20 applies, not complying with Part 20, and
- (iii) if the cooperative is one to which Part 21 applies, not complying with Part 21; or
- (b) would not be advisable for any other valid reason.

Reliance on declarations

(4) For the purpose of subsection (3), the Director may rely on the articles of revival and the declarations referred to in subsection (2).

Date of revival

(5) A cooperative is revived under this Act on the date shown on the certificate of revival.

Rights preserved

(6) In the same manner and to the same extent as if it had not been dissolved, but subject to any reasonable terms that may be imposed by the Director, to the rights acquired by any person after its dissolution and to any changes to the internal affairs of the cooperative after its dissolution, the revived cooperative is

- (a) restored to its previous position in law, including the restoration of any rights and privileges whether arising before its dissolution or after its dissolution and before its revival; and
- (b) liable for the obligations that it would have had if it had not been dissolved whether they arise before its dissolution or after its dissolution and before its revival.

Legal actions

(7) Any legal action respecting the affairs of a revived cooperative taken between the time of its dissolution and its revival is valid and effective.

Definition of “interested person”

(8) In this section, “interested person” includes

- (a) a member, a shareholder, a director, an officer, an employee and a creditor of the dissolved cooperative;
- (b) a person who has a contractual relationship with the dissolved cooperative; and
- (c) a trustee in bankruptcy for the dissolved cooperative.

Dissolution if no property and no liability

309. (1) A cooperative that has no property and no liabilities may be dissolved by a special resolution of the members and, if the cooperative has issued investment shares, by a separate special resolution of the shareholders of each class, whether or not they are otherwise entitled to vote.

Dissolution if property disposed of

(2) A cooperative that has property or liabilities, or both, may be dissolved by a special resolution of the members and, if the cooperative has issued investment shares, by a separate special resolution of the shareholders of each class, whether or not they are otherwise entitled to vote, if

- (a) by the special resolution or resolutions they authorize the directors to cause the cooperative to distribute property and discharge liabilities; and
- (b) the cooperative has distributed property and discharged liabilities before it sends articles of dissolution to the Director under subsection (3).

Articles of dissolution

(3) Articles of dissolution in the form that the Director fixes must be sent to the Director.

Certificate of dissolution

(4) On receipt of articles of dissolution, the Director must issue a certificate of dissolution.

Effect of certificate

(5) The cooperative ceases to exist on the date shown in the certificate of dissolution.

Proposing liquidation and dissolution

310. (1) The directors may propose, or a member may, in accordance with section 58, make a proposal for, the voluntary liquidation and dissolution of a cooperative.

Notice of meeting

(2) Notice of any meeting of the cooperative at which voluntary liquidation and dissolution is to be proposed must set out the terms of the proposal.

Approval

(3) A cooperative may liquidate and dissolve by a special resolution of the members and, if the cooperative has issued investment shares, by a separate special resolution of the shareholders of each class, whether or not they are otherwise entitled to vote.

Approbation Statement of intent to dissolve

(4) A statement of intent to dissolve in the form that the Director fixes must be sent to the Director.

Certificate of intent to dissolve

(5) On receipt of a statement of intent to dissolve, the Director must issue a certificate of intent to dissolve.

Effect of certificate

(6) On the issue of a certificate of intent to dissolve, the cooperative must cease to carry on business except to the extent necessary for the liquidation, but its corporate existence continues until the Director issues a certificate of dissolution.

Liquidation

(7) After the issue of a certificate of intent to dissolve, the cooperative must, without delay,
(a) cause a notice to be sent to each known creditor of the cooperative;
(b) proceed to collect its property, dispose of properties that are not to be distributed in kind to its members or shareholders, discharge all its obligations and do all other acts required to liquidate its business; and
(c) after giving the notice required under paragraph (a) and adequately providing for the payment or discharge of all its obligations, but subject to the articles and Parts 20 and 21, distribute its remaining property among its members and shareholders, if any, according to their respective rights.

Supervision by court

(8) Any interested person may, at any time during the liquidation of a cooperative, apply to a court for an order that the liquidation be continued under the supervision of the court as provided in this Part, and on the application the court may so order and make any further order it thinks fit.

Notice to Director

(9) An applicant under this section must give the Director notice of the application.

Revocation

(10) At any time after issue of a certificate of intent to dissolve and before issue of a certificate of dissolution, a certificate of intent to dissolve may be revoked by sending the Director a statement of revocation of intent to dissolve in the form that the Director fixes, if the revocation is approved in the same manner as the resolution under subsection (3).

Certificate of revocation of intent to dissolve

(11) On receipt of a statement of revocation of intent to dissolve, the Director must issue a certificate of revocation of intent to dissolve.

Effect of certificate

(12) On the date shown in the certificate of revocation of intent to dissolve, the revocation is effective and the cooperative may continue to carry on its business or businesses.

Articles of dissolution

(13) If a certificate of intent to dissolve has not been revoked and the cooperative has complied with subsection (7), articles of dissolution in the form that the Director fixes must be sent to the Director.

Certificate of dissolution

(14) On receipt of articles of dissolution, the Director must issue a certificate of dissolution.

Effect of certificate

(15) The cooperative ceases to exist on the date shown in the certificate of dissolution.

Dissolution by Director

311. (1) Subject to subsections (2) and (3), the Director may dissolve a cooperative by issuing a certificate of dissolution under this section if the cooperative
(a) has not commenced business within three years after the date shown in its certificate of incorporation;

- (b) has not carried on its business for three consecutive years;
- (c) is in default for a period of one year in sending the Director any fee, notice or document required by this Act; or
- (d) does not have any directors or is in the situation described in subsection 85(6).

Publication

- (2) The Director may not dissolve a cooperative under this section until
- (a) one hundred and twenty days have elapsed since notice of intent to dissolve has been given to the cooperative and to each of its directors; and
 - (b) notice of intent to dissolve the cooperative has been published in a publication generally available to the public.

Certificate of dissolution

- (3) Unless cause to the contrary has been shown or an order has been made by a court under section 315, the Director may, after the end of the one hundred and twenty days referred to in subsection (2), issue a certificate of dissolution.

Exception — non-payment of incorporation fee

- (3.1) Despite anything in this section, the Director may dissolve a cooperative by issuing a certificate of dissolution if the fee for the issuance of a certificate of incorporation is not paid.

Effect of certificate

- (4) The cooperative ceases to exist on the date shown in the certificate of dissolution.

Grounds for dissolution

- 312.** (1) Any interested person may apply to a court for an order dissolving a cooperative if the cooperative has
- (a) failed for two or more consecutive years to comply with the requirements of this Act with respect to the holding of annual meetings;
 - (b) contravened section 18, subsection 27(2) or section 31, 247 or 249; or
 - (c) procured any certificate under this Act by misrepresentation.

Notice to director

- (2) An applicant under this section must give the Director notice of the application.

Dissolution order

- (3) On an application under this section, the court may order that the cooperative be dissolved or that it be liquidated and dissolved under the supervision of the court, and the court may make any other order it thinks fit.

Certificate

- (4) On receipt of an order under this section or section 313, the Director must
- (a) if the order is to dissolve the cooperative, issue a certificate of dissolution in the form that the Director fixes; or
 - (b) if the order is to liquidate and dissolve the cooperative under the supervision of the court, issue a certificate of intent to dissolve in the form that the Director fixes and publish notice of the order in a publication generally available to the public.

Effect of certificate

- (5) The cooperative ceases to exist on the date shown in the certificate of dissolution.

Further grounds

- 313.** (1) A court may order the liquidation and dissolution of a cooperative or any of its affiliates on the application of a member or a shareholder if the court is satisfied
- (a) that the cooperative no longer carries on business or is no longer organized or operating on a cooperative basis;
 - (b) that an act or omission of the cooperative or any of its affiliates effects a result, that the business or affairs of the cooperative or any of its affiliates are or have been carried on or conducted in a manner, or that the powers of the directors of the cooperative or any of its affiliates are or have been exercised in a manner, that is oppressive or unfairly prejudicial to, or that unfairly disregards the interests of, a member, shareholder, security holder, creditor, director or officer; or
 - (c) that events have occurred that entitle a member or shareholder, in accordance with a unanimous agreement, to demand that the cooperative be dissolved or that it is just and equitable that the cooperative be liquidated and dissolved.

Alternate order

(2) On an application under this section, a court may make any order under this section or section 340 that it thinks fit.

Application of section 341

(3) Section 341 applies to an application under this section.

Application for supervision

314. (1) An application to a court to supervise a voluntary liquidation and dissolution under subsection 310(8) must state the reasons, verified by an affidavit of the applicant, why the court should supervise the liquidation and dissolution.

Court supervision

(2) If a court makes an order applied for under subsection 310(8), the liquidation and dissolution of the cooperative continues under the supervision of the court in accordance with this Act.

Application to court

315. (1) An application to a court under subsection 313(1) must state the reasons, verified by an affidavit of the applicant, why the cooperative should be liquidated and dissolved.

Show cause order

(2) On an application under subsection 313(1), the court may make an order requiring the cooperative and any person who has an interest in it or claim against it to show cause, at a specified time and place, not less than four weeks after the date of the order, why the cooperative should not be liquidated and dissolved.

Powers of court

(3) On an application under subsection 313(1), the court may order the directors and officers of the cooperative to provide the court with all material information known to or reasonably ascertainable by them, including

- (a) financial statements of the cooperative;
- (b) the name and address of each member and shareholder; and
- (c) the name and address of each known creditor or claimant, including any creditor or claimant with unliquidated, future or contingent claims, and any person with whom the cooperative has a contract.

Publication

(4) A copy of an order made under subsection (2) must be

- (a) published as directed in the order, at least once in each week before the time appointed for the hearing, in a publication generally available to the public; and
- (b) served on the Director and each person named in the order.

Person responsible

(5) Publication and service of an order under this section must be effected by the cooperative or by any other person and in any manner that the court may order.

Powers of court

316. In connection with the liquidation and dissolution of a cooperative, the court may, if it is satisfied that the cooperative is able to pay or adequately provide for the discharge of all its obligations, make any order it thinks fit, including an order

- (a) to liquidate;
- (b) appointing a liquidator, with or without security, and fixing their remuneration, or replacing a liquidator;
- (c) appointing inspectors or referees, specifying their powers and fixing their remuneration, or replacing inspectors or referees;
- (d) determining the notice to be given to any interested person, or dispensing with notice to any person;
- (e) determining the validity of any claim made against the cooperative;
- (f) at any stage of the proceedings, restraining the directors and officers from
 - (i) exercising any of their powers, or
 - (ii) collecting or receiving any debt or other property of the cooperative, and from paying out or transferring any property of the cooperative, except as permitted by the court;
- (g) determining and enforcing the duty or liability of any present or former director, officer, member or shareholder
 - (i) to the cooperative, or
 - (ii) for an obligation of the cooperative;

- (h) approving the payment, satisfaction or compromise of claims against the cooperative and the retention of assets for those purposes, and determining the adequacy of provisions for the payment or discharge of obligations of the cooperative, whether liquidated, unliquidated, future or contingent;
- (i) disposing of or destroying documents and records of the cooperative;
- (j) on the application of a creditor, the inspectors or the liquidator, giving directions on any matter arising on the liquidation;
- (k) after notice has been given to all interested parties, relieving a liquidator from an omission or default on any terms that the court thinks fit and confirming any act of the liquidator;
- (l) subject to section 322, approving any proposed interim or final distribution to members or shareholders in money or in property in accordance with their respective rights;
- (m) disposing of any property that belongs to creditors, members or shareholders who cannot be found;
- (n) on the application of a director, officer, member, shareholder or creditor or the liquidator,
- (i) staying the liquidation on any terms and conditions that the court thinks fit,
- (ii) continuing or discontinuing the liquidation proceedings, or
- (iii) to the liquidator, to restore to the cooperative all its remaining property; and
- (o) after the liquidator has rendered a final account to the court, dissolving the cooperative.

Effect of order

317. The liquidation of a cooperative commences when a court makes an order for liquidation.

Cessation of business and powers

- 318.** (1) If a court makes an order for liquidation of a cooperative,
- (a) the cooperative continues in existence but must cease to carry on business, except the business that is in the liquidator's opinion required for an orderly liquidation; and
 - (b) the powers of the directors, members and shareholders cease and vest in the liquidator, except as specifically authorized by the court.

Delegation by liquidator

- (2) The liquidator may delegate any of the powers vested in him or her by paragraph (1)(b) to the directors or members.

Appointment of liquidator

319. (1) When making an order for the liquidation of a cooperative or at any time after making one, the court may appoint any person, including a director, officer, member or shareholder, or any other body corporate, as liquidator of the cooperative.

Vacancy

- (2) If an order for the liquidation of a cooperative has been made and the office of liquidator is or becomes vacant, the property of the cooperative is under the control of the court until the office of liquidator is filled.

Duties of liquidator

- 320.** A liquidator must, without delay after being appointed,
- (a) give notice of appointment to each claimant and creditor known to the liquidator;
 - (b) publish notice in a publication generally available to the public and take reasonable steps to give notice of the appointment in each province or other jurisdiction where the cooperative carries on business, requiring
 - (i) any person who is indebted to the cooperative to render an account and pay any amount owing to the liquidator at the time and place specified,
 - (ii) any person who possesses property of the cooperative to deliver it to the liquidator at the time and place specified, and (iii) any person who has a claim against the cooperative, whether liquidated, unliquidated, future or contingent, to present particulars of it in writing to the liquidator not later than two months after the first publication of the notice;
 - (c) take the property of the cooperative into custody and control;
 - (d) open and maintain a trust account for money received by the liquidator in the course of the liquidation;
 - (e) keep accounts of the moneys of the cooperative received and paid out in the course of the liquidation;
 - (f) maintain separate lists of the members, shareholders and creditors and other persons who have claims against the cooperative;
 - (g) if at any time the liquidator determines that the cooperative is unable to pay or adequately provide for the discharge of its obligations, apply to the court for directions;

- (h) deliver to the court and to the Director, at least once in every twelve month period after appointment or more often as the court may require, financial statements of the cooperative in the form required by section 247, or in any other form that the liquidator may think proper or that the court may require; and
- (i) after the final accounts are approved by the court, distribute any remaining property of the cooperative among the members and shareholders according to their respective rights.

Powers of liquidator

321. (1) A liquidator may

- (a) retain lawyers, notaries, accountants, engineers, appraisers and other professionals;
- (b) bring, defend or take part in any civil, criminal, administrative, investigative or other action or proceeding in the name and on behalf of the cooperative;
- (c) carry on the business of the cooperative as required for an orderly liquidation;
- (d) sell any property of the cooperative by public auction or private sale;
- (e) do all acts and execute any documents in the name and on behalf of the cooperative;
- (f) borrow money on the security of the property of the cooperative;
- (g) settle or compromise any claims by or against the cooperative; and
- (h) do all other things necessary for the liquidation of the cooperative and the distribution of its property.

Due diligence

- (2) A liquidator is not liable under this Part if the liquidator exercised the care, diligence and skill that a reasonably prudent person would have exercised in comparable circumstances, including reliance in good faith on
 - (a) financial statements of the cooperative represented to the liquidator by an officer of the cooperative or in a written report of the auditor of the cooperative fairly to reflect the financial condition of the cooperative; or
 - (b) a report of a person whose profession lends credibility to a statement made by the professional person.

Application to court

- (3) If a liquidator has reason to believe that any property of the cooperative is in the possession or control of a person or that anyone has concealed, withheld or misappropriated any property of the cooperative, the liquidator may apply to the court for an order requiring the person to appear before the court at the time and place designated in the order and to be examined.

Power of court

- (4) If the examination discloses that the person has concealed, withheld or misappropriated property of the cooperative, the court may order the person to restore it or pay compensation to the liquidator.

Costs of liquidation

322. (1) A liquidator must pay the costs of liquidation out of the property of the cooperative and must pay or make adequate provision for all claims against it.

Final accounts

- (2) No later than one year after appointment, and after paying or making adequate provision for all claims against the cooperative, the liquidator must apply to the court for
 - (a) approval of the final accounts of the liquidator and, subject to the articles and Parts 20 and 21, an order permitting a distribution in money or in kind of the remaining property of the cooperative to the members and shareholders, if any, according to their respective rights; or
 - (b) an extension of time, setting out the reasons for the extension.

Application

- (3) If a liquidator fails to make the application required by subsection (2), a member or shareholder may apply to the court for an order for the liquidator to show cause why a final accounting and distribution should not be made.

Publication

- (4) A liquidator must give notice of their intention to make an application under subsection (2) to the Director, to each inspector appointed under section 316, to each member or shareholder and to any person who provided a security or fidelity bond for the liquidation, and must publish the notice in a newspaper published or distributed in the place where the cooperative has its registered office, in any manner set out in the by-laws or as otherwise directed by the court.

Final order

(5) If the court approves the final accounts rendered by a liquidator, the court must make an order

- (a) directing the Director to issue a certificate of dissolution;
- (b) directing the custody or disposal of the documents of the cooperative; and
- (c) discharging the liquidator, subject to the remaining duty required by subsection (6).

Delivery of order

(6) The liquidator must send a certified copy of the order described in subsection (5) to the Director without delay.

Certificate of dissolution

(7) On receipt of the order described in subsection (5), the Director must issue a certificate of dissolution.

Effect of certificate

(8) The cooperative ceases to exist on the date shown in the certificate of dissolution.

Right to distribution in money

323. A member or shareholder may apply to the court for an order requiring the distribution of the property of the cooperative to be in money if, in the course of the liquidation of the cooperative, the members and shareholders resolve or the liquidator proposes to

- (a) exchange all or substantially all the property of the cooperative for securities of another body corporate that are to be distributed to the members and shareholders, if any; or
- (b) distribute all or part of the property of the cooperative to the members and shareholders, if any, in kind.

Powers of court

324. On an application under section 323, the court, subject to the articles and Parts 20 and 21, may order

- (a) that all the property of the cooperative be converted into and distributed in money; or
- (b) that the claims of a member or shareholder applying under this section be satisfied by a distribution in money, in which case subsections 302(19) and (20) apply.

Custody of records

325. A person who has been granted custody of the documents of a dissolved cooperative remains liable to produce them for six years after the date of its dissolution or until the end of any other shorter period that may be ordered under subsection 322(5).

Heirs and representatives

326. (1) In this section, “member” and “shareholder” include their heirs and personal representatives.

Continuation of actions

(2) Despite the dissolution of a cooperative under this Act,

- (a) a civil, criminal, administrative, investigative or other action or proceeding commenced by or against the cooperative before its dissolution may be continued as if it had not been dissolved;
- (b) a civil, criminal, administrative, investigative or other action or proceeding may be brought against the cooperative within two years after its dissolution as if it had not been dissolved; and
- (c) any property that would have been available to satisfy a judgment or order if the cooperative had not been dissolved remains available for those purposes.

Service

(3) Service of a document on a cooperative after its dissolution may be effected by serving the document on a person named in the last notice sent under section 81 or 91.

Reimbursement

(4) Despite the dissolution of a cooperative under this Act, a member or shareholder to whom any of its property has been distributed is liable to any person claiming under subsection (2) to the extent of the amount distributed to that member or shareholder. An action to enforce the liability may be brought no later than two years after the date of the dissolution of the cooperative.

Representative action

(5) A court may order an action referred to in subsection (4) to be brought against the persons who were members or shareholders as a class, subject to any conditions that the

court thinks fit, and, if the plaintiff establishes a claim, the court may refer the proceedings to a referee or other officer of the court who may

(a) add as a party to the proceedings each member or shareholder who was found by the plaintiff;

(b) determine, subject to subsection (4), the amount that each of those members and shareholders must contribute towards satisfaction of the plaintiff's claim; and

(c) direct payment of the amounts so determined.

Unknown claimants

327. (1) On the dissolution of a cooperative under this Act, the portion of the property to be distributed to a creditor, member or shareholder who cannot be found must be converted into money and paid to the Receiver General.

Deemed satisfaction

(2) A payment under subsection (1) is deemed to be in satisfaction of a debt or claim of the creditor, member or shareholder.

Recovery

(3) If at any time a person establishes their entitlement to any money paid to the Receiver General under this Act, the Receiver General must pay the person an equivalent amount out of the Consolidated Revenue Fund.

Vesting in Crown

328. (1) Subject to subsection 326(2) and section 327, property of a cooperative that has not been disposed of at the date of its dissolution under this Act vests in Her Majesty in right of Canada.

Return of property on revival

(2) If a cooperative is revived as a cooperative under section 308, any property, other than money, that vested in Her Majesty under subsection (1) and that has not been disposed of must be returned to the cooperative, and there must be paid to the cooperative out of the Consolidated Revenue Fund

(a) an amount equal to any money received by Her Majesty under subsection (1); and

(b) if property other than money vested in Her Majesty under subsection (1) and the property has been disposed of, an amount equal to the lesser of

(i) the value of the property at the date it vested in Her Majesty, and

(ii) the amount realized by Her Majesty from the disposition of the property.

PART 18

INVESTIGATIONS

Investigation

329. (1) Any interested person may apply, without notice or on any notice that the court may require, to a court having jurisdiction in the place where the cooperative has its registered office for an order directing an investigation to be made of the cooperative and any of its affiliates.

Grounds

(2) The court may order an investigation to be made of the cooperative and any of its affiliates if, on an application under subsection (1), it appears to the court that the application is neither frivolous nor vexatious and that

(a) the cooperative is not organized, operated or carrying on business on a cooperative basis;

(b) the business or the affairs of the cooperative are not being carried out or conducted in accordance with

(i) the restrictions contained in its articles,

(ii) its by-laws,

(iii) a unanimous agreement, or

(iv) this Act;

(c) the business of the cooperative or any of its affiliates is or has been carried on with intent to defraud a person;

(d) the business or affairs of the cooperative or any of its affiliates are or have been carried on or conducted, or the powers of the directors are or have been exercised, in a manner that is oppressive or unfairly prejudicial to, or that unfairly disregards the interests of, a member or a security holder;

(e) the cooperative or any of its affiliates was formed for a fraudulent or unlawful purpose or is to be dissolved for a fraudulent or unlawful purpose; or

(f) persons concerned with the formation, business or affairs of the cooperative or any of its affiliates have, in connection with the formation, business or affairs of the cooperative acted fraudulently or dishonestly.

No security for costs

(3) An applicant under this section is not required to give security for costs.

Powers of court

330. (1) In connection with an investigation under this Part, the court may make any order it thinks fit, including an order

- (a) to investigate;
- (b) appointing an inspector, who may be the Director, and fixing their remuneration, or replacing an inspector;
- (c) determining the notice to be given to any interested person, or dispensing with notice to any person;
- (d) authorizing an inspector to enter any premises in which the court is satisfied there might be relevant information and to examine any thing and make copies of any document found on the premises;
- (e) requiring any person to produce documents to an inspector;
- (f) authorizing an inspector to conduct a hearing, administer oaths and examine any person on oath, and setting out rules for the conduct of hearings;
- (g) requiring any person to attend a hearing conducted by an inspector and to give evidence on oath;
- (h) giving directions to an inspector or any other interested person on any matter arising in the investigation;
- (i) requiring an inspector to make an interim or final report to the court;
- (j) determining whether a report of an inspector should be published and, if so, ordering its publication in whole or in part or that copies of it be sent to any person the court designates;
- (k) requiring an inspector to discontinue the investigation;
- (l) if the cooperative is incorporated with membership capital, requiring the cooperative to be continued under the *Canada Business Corporations Act*, or if it is incorporated without membership capital, requiring it to be dissolved;
- (m) determining any matter that relates to the relationship between a member and the cooperative; and
- (n) requiring the cooperative to pay the costs of the investigation.

Copy of report

(2) An inspector must send the Director a copy of every report made by the inspector under this Part.

Powers of inspector

331. (1) An inspector appointed under this Part has the powers set out in the order appointing the inspector.

Exchange of information

(2) In addition to the powers set out in the order appointing an inspector, the inspector may provide information to, or exchange information and otherwise cooperate with, any public official in Canada or elsewhere who

- (a) is authorized to exercise investigatory powers; and
- (b) is investigating, in respect of the cooperative, any allegation of improper conduct that is the same as or similar to the conduct described in subsection 329(2).

Court order

(3) An inspector must, on the request of an interested person, produce a copy of any order made under subsection 330(1).

Hearing in private

332. (1) Any interested person may apply to the court for an order that a hearing under this Part be heard in private and for directions on any matter arising in the investigation.

Right to counsel

(2) A person whose conduct is being investigated or who is being examined at a hearing conducted under this Part has the right to be represented by counsel.

Incriminating statements

333. No person is excused from attending and giving evidence and producing documents to an inspector under this Part by reason only that the evidence tends to incriminate the

person or subject the person to a proceeding or penalty, but no such evidence may be used or is receivable against the person in any later proceeding instituted under an Act of Parliament, other than a prosecution for perjury in giving the evidence or a prosecution under section 132 or 136 of the *Criminal Code* in respect of the evidence.

Absolute privilege — defamation

334. Any oral or written statement or report made by an inspector or other person in an investigation under this Part has absolute privilege.

Membership shares included

335. (1) For the purposes of this section, a security includes a membership share or an interest in one.

Information respecting ownership and control

(2) If the Director is satisfied that, for the purposes of Part 9 or 10 or for the purposes of enforcing any regulation made under section 130, there is reason to inquire into the ownership or control of a security of a cooperative or any of its affiliates, the Director may require any person that the Director reasonably believes has or has had an interest in the security or acts or has acted on behalf of a person with such an interest to report to the Director or to any designated person,

(a) information that the person has or can reasonably be expected to obtain as to present and past interests in the security; and

(b) the names and addresses of the persons so interested and of any person who acts or has acted in relation to the security on behalf of the persons so interested.

Deemed interest in securities

(3) For the purposes of subsection (2), a person is deemed to hold an interest in a security if

(a) in the case of a membership share, the person is or is entitled to be entered in the records of the cooperative as the owner of the membership share; and

(b) in the case of an investment share,

(i) the person has a right to vote or to acquire or dispose of the investment share or an interest in it,

(ii) the person's consent is necessary for the exercise of the rights or privileges of any other person interested in the investment share, or

(iii) any other person interested in the investment share can be required or is accustomed to exercise rights or privileges attached to it in accordance with that person's instructions.

Publication

(4) The Director must publish, in a publication generally available to the public, the particulars of information obtained under this section if the particulars

(a) are required by this Act or the regulations to be disclosed; and

(b) have not previously been so disclosed.

Solicitor-client privilege

336. Nothing in this Part may be construed as affecting the privilege that exists in respect of lawyers and notaries and their clients.

Inquiries

337. The Director may make inquiries of any person relating to compliance with this Act.

PART 18.1

APPORTIONING AWARD OF DAMAGES

INTERPRETATION AND APPLICATION

Definitions 337.1 The definitions in this section apply in this Part.

"financial interest", with respect to a cooperative, includes

(a) a security;

(b) a title to or an interest in capital, assets, property, profits, earnings or royalties;

(c) an option or other interest in, or a subscription

to, a security;

(d) an agreement under which the interest of the purchaser is valued for purposes of conversion or surrender by reference to the value of a proportionate interest in a specified portfolio of assets;

(e) an agreement providing that money received will be repaid or treated as a subscription for shares, units or interests at the option of any person or the cooperative;

(f) a profit-sharing agreement or certificate;

- (g) a lease, claim or royalty in oil, natural gas or mining, or an interest in the lease, claim or royalty;
- (h) an income or annuity contract that is not issued by an insurance company governed by an Act of Parliament or a law of a province;
- (i) an investment contract; and
- (j) anything that is prescribed to be a financial interest.

“financial loss” means a financial loss arising out of an error, omission or misstatement in financial information concerning a cooperative that is required under this Act or the regulations.

“third party” includes any subsequent party that is joined in proceedings before a court.

Application of Part

337.2 (1) This Part applies to the apportionment of damages awarded to a plaintiff for financial loss after a court has found more than one defendant or third party responsible for the financial loss.

Non-application of Part

(2) This Part does not apply to an award of damages to any of the following plaintiffs:

- (a) Her Majesty in right of Canada or of a province;
- (b) an agent of Her Majesty in right of Canada or of a province or a federal or provincial Crown corporation or government agency, unless a substantial part of its activities involves trading, including making investments in, securities or other financial instruments;
- (c) a charitable organization, private foundation or public foundation within the meaning of subsection 149.1(1) of the *Income Tax Act*; or
- (d) an unsecured creditor in respect of goods or services that the creditor provided to a cooperative.

APPORTIONMENT OF DAMAGES

Degree of responsibility

337.3 (1) Subject to this section and sections 337.4 to 337.6, every defendant or third party who has been found responsible for a financial loss is liable to the plaintiff only for the portion of the damages that corresponds to their degree of responsibility for the loss.

Uncollectable amounts

(2) If any part of the damages awarded against a responsible defendant or third party is uncollectable, the court may, on the application of the plaintiff, reallocate that amount to the other responsible defendants or third parties, if the application is made within one year after the date that the judgment was made enforceable.

Reallocation

(3) The amount that may be reallocated to each of the other responsible defendants or third parties under subsection (2) is calculated by multiplying the uncollectable amount by the percentage that corresponds to the degree of responsibility of that defendant or third party for the total financial loss.

Maximum amount

(4) The maximum amount determined under subsection (3), in respect of any responsible defendant or third party, may not be more than fifty per cent of the amount originally awarded against that responsible defendant or third party.

Plafond Exception — fraud

337.4 (1) The plaintiff may recover the whole amount of the damages awarded by the court from any defendant or third party who has been held responsible for a financial loss if it was established that the defendant or third party acted fraudulently or dishonestly.

Contribution

(2) The defendant or third party referred to in subsection (1) is entitled to claim contribution from any other defendant or third party who is held responsible for the loss.

JOINT AND SEVERAL, OR SOLIDARY, LIABILITY

Individual or personal body corporate

337.5 (1) Defendants and third parties referred to in subsection 337.2(1) are jointly and severally, or solidarily, liable for the damages awarded to a plaintiff who is an individual or a personal body corporate and who

(a) had a financial interest in a cooperative on the day that an error, omission or misstatement in financial information concerning the cooperative occurred, or acquired a financial interest in the period between the day that the error, omission or misstatement occurred and the day, as determined by the court, that it was generally disclosed; and

(b) has established that the value of the plaintiff's total financial interest in the cooperative was not more than the prescribed amount at the close of business on the day that the error, omission or misstatement occurred or at the close of business on any day that the plaintiff acquired a financial interest in the period referred to in paragraph (a).

Exception (1.1)

Subsection (1) does not apply when the plaintiff brings the action as a member of a partnership or other association or as a trustee in bankruptcy, liquidator or receiver of a body corporate.

Interpretation (

2) For the purposes of this section,

(a) a personal body corporate is a body corporate that is not actively engaged in any financial, commercial or industrial business and that is controlled by an individual, or by a group of individuals who are connected by marriage, common-law partnership or any legal parent-child relationship or are connected indirectly by a combination of those relationships, whether or not the individuals through whom they are connected are members of the group; and

(b) a common-law partnership is a relationship between two persons who are cohabiting with each other in a conjugal relationship and have done so for a period of at least one year.

Equitable grounds

337.6 (1) If the value of the plaintiff's total financial interest referred to in subsection 337.5(1) is greater than the prescribed amount, a court may nevertheless determine that the defendants and third parties are jointly and severally, or solidarily, liable if the court considers that it is just and reasonable to do so.

Tribunal Factors

(2) The Governor in Council may establish factors that the court shall take into account in deciding whether to hold the defendants and third parties jointly and severally, or solidarily, liable.

Statutory Instruments Act

(3) The *Statutory Instruments Act* does not apply to the factors referred to in subsection (2), but the factors shall be published in Part I of the *Canada Gazette*.

Value of security

337.7 (1) When, in order to establish the value of the total financial interest referred to in subsection 337.5(1), it is necessary to determine the value of a security that is traded on an organized market, the value of the security is, on the day specified in subsection (3),

(a) the closing price of that class of security;

(b) if no closing price is given, the average of the highest and lowest prices of that class of security; or

(c) if the security was not traded, the average of the bid and ask prices of that class of security.

Court may adjust value

(2) The court may adjust the value of a security that has been determined under subsection (1) when the court considers it reasonable to do so.

Valuation day

(3) The value of the security is to be determined as of the day that the error, omission or misstatement occurred. If the security was acquired in the period between that day and the day, as determined by the court, that the error, omission or misstatement was generally disclosed, the value is to be determined as of the day that it was acquired.

Definition of "organized market"

(4) In this section, "organized market" means a recognized exchange for a class of securities or a market that regularly publishes the price of that class of securities in a publication that is generally available to the public.

Court determines value

337.8 (1) The court shall determine the value of all or any part of a financial interest that is subject to resale restrictions or for which there is no organized market.

Factors

(2) The Governor in Council may establish factors that the court may take into account in determining value under subsection (1).

Statutory Instruments Act

(3) The *Statutory Instruments Act* does not apply to the factors referred to in subsection (2), but the factors shall be published in Part I of the *Canada Gazette*.

Application to determine value

337.9 The plaintiff may, by application made at any time before or during the course of the proceedings, request the court to determine the value of the plaintiff's financial interest for the purpose of subsection 337.5(1).

PART 19

REMEDIES, OFFENCES AND PUNISHMENT

Definitions

338. The definitions in this section apply in this Part.

"action" means an action taken under this Act.

"complainant" means

- (a) a member or former member;
- (b) a registered holder or beneficial owner, or a former registered holder or beneficial owner, of a security of a cooperative or any of its affiliates;
- (c) a director or an officer, or a former director or officer, of a cooperative or any of its affiliates; or
- (d) [Repealed, 2001, c. 14, s. 219]
- (e) any other person who, in the opinion of the court, is a proper person to make an application under this Part.

Commencement of derivative action

339. (1) Subject to subsection (2), a complainant may apply to the court for leave to bring an action in the name and on behalf of a cooperative or any of its subsidiaries, or to intervene in an action to which the cooperative or any of its subsidiaries is a party, for the purpose of prosecuting, defending or discontinuing the action on behalf of the cooperative or subsidiary.

Condition precedent

(2) No person may bring an action and no person may intervene in an action brought under subsection (1) unless the court is satisfied that

- (a) if the directors of the cooperative or its subsidiary do not bring, diligently prosecute, defend or discontinue the action, the complainant has given notice to the directors of the cooperative or its subsidiary of the complainant's intention to apply to the court under subsection (1) not less than fourteen days before bringing the application, or as otherwise ordered by the court;
- (b) the complainant is acting in good faith; and
- (c) it appears to be in the interests of the cooperative or its subsidiary to bring, prosecute, defend or discontinue the action.

Powers of court

(3) In an action brought or intervened in under this section, the court may make any order it considers appropriate, including an order

- (a) authorizing the complainant or any other person to control the conduct of the action;
- (b) giving directions for the conduct of the action;
- (c) directing that an amount adjudged payable by a defendant in the action be paid, in whole or in part, directly to a former or present member or to a former or present security holder of the cooperative or its subsidiary instead of to the cooperative or its subsidiary; or
- (d) requiring the cooperative or its subsidiary to pay reasonable costs incurred by the complainant in connection with the action.

Application to court re oppression

340. (1) A complainant may apply to the court for an order, including an alternate order, under this section.

Grounds (2)

If the court receives an application under subsection (1) and is satisfied that an act or omission of a cooperative effects a result, that the business or affairs of the cooperative are or have been carried on or conducted in a manner, or that the powers of the director are or have been exercised in a manner, that is oppressive or unfairly prejudicial to or that unfairly disregards the interests of a member or other security holder, creditor, director or officer of the cooperative, the court may order the rectification of the matters complained of.

Types of order

(3) For the purpose of subsection (2), the court may make any order that it considers appropriate, including an order

- (a) restraining the conduct complained of;
- (b) appointing a receiver or receiver-manager;
- (c) requiring the cooperative to amend an agreement with members generally or with a member;
- (d) regulating the affairs of the cooperative by amending its articles or by-laws or creating or amending a unanimous agreement;
- (e) directing an issue or exchange of securities;
- (f) directing changes in the directors;
- (g) determining whether a person is or is qualified to be a member;
- (h) determining any matter in regard to the relations between the cooperative and a member;
- (i) subject to subsection (6), directing the cooperative or any other person to purchase securities of a security holder;
- (j) subject to subsection (6), directing the cooperative or any other person to pay to a security holder any part of the money paid by the security holder for securities;
- (k) subject to subsection (6), directing the cooperative to redeem membership shares, repay member loans or to pay to a member any other amount standing to the member's credit in the records of the cooperative;
- (l) varying or setting aside a transaction or contract to which the cooperative is a party and compensating the cooperative or any other party to the transaction or contract;
- (m) directing the production and delivery within a specified time of financial statements of the cooperative;
- (n) directing an accounting;
- (o) compensating an aggrieved person;
- (p) directing rectification of the registers or other records of the cooperative under section 342;
- (q) liquidating and dissolving the cooperative;
- (r) directing a special audit or an investigation under section 329; or
- (s) requiring the trial of an issue.

Exclusion

(5) A member or shareholder is not entitled to dissent under section 302 if an amendment to the articles is effected under this section.

Limitation

(6) No cooperative may make a payment to a member or shareholder under an order of the court if there are reasonable grounds to believe that

- (a) the cooperative is, or would after that payment be, unable to pay its liabilities as they become due; or
- (b) the realizable value of the cooperative's assets after the payment would be less than the total of
 - (i) its liabilities, and
 - (ii) the amount that would be required to pay the holders of securities who have a right to be paid, on a redemption or liquidation, rateably with or in priority to the holders of the securities to be purchased or redeemed.

Alternate order

(7) An applicant under this section may apply for an order under section 313 instead of the order under this section.

Evidence of member or shareholder approval not decisive

341. (1) No application made and no action brought or intervened in under this Part is to be stayed or dismissed by reason only that it is shown that an alleged breach of a right or

duty owed to the cooperative or any of its subsidiaries has been or may be approved by the members or shareholders, but evidence of approval by the members or shareholders must be taken into account by the court in making an order under section 313 or this Part.

Court approval to discontinue

(2) No application made and no action brought or intervened in under this Part is to be stayed, discontinued, settled or dismissed for want of prosecution without the approval of the court given on any terms that the court considers appropriate.

Notice

(3) If the court determines that the interests of a complainant may be substantially affected by a stay, discontinuance, settlement or dismissal mentioned in subsection (2), the court may order any party to the application or action to give notice of the application or action to the complainant.

No security for costs

(4) A complainant is not required to give security for costs in an application made or action brought or intervened in under this Part.

Interim costs

(5) In an application made or an action brought or intervened in under this Part, the court may at any time order the cooperative or its subsidiary to pay to the complainant interim costs, including legal fees and disbursements, but the complainant may be held accountable for any interim costs so paid on the final disposition of the application or action.

Application to court to rectify records

342. (1) If the name of a person is alleged to be or to have been wrongly entered or retained in or wrongly deleted or omitted from the registers or other records of a cooperative, the cooperative, a security holder of the cooperative or any aggrieved person may apply to the court for an order that the registers or records be rectified.

Power of court

(2) On an application made under this section, the court may make any order it considers appropriate, including an order

- (a) requiring the registers or records of the cooperative to be rectified;
- (b) restraining the cooperative from calling or holding a meeting or allocating or paying a dividend or interest on shares or a patronage refund before rectification of the registers or records;
- (c) determining the right of a party to the proceedings to have the party's name entered or retained in or deleted or omitted from the registers or records of the cooperative, whether the issue arises between two or more members or security holders, or alleged members or security holders, or between the cooperative and a member or security holder or alleged member or security holder; or
- (d) compensating a party who has incurred a loss by reason of the wrongful entry, retention, deletion or omission.

Application for directions

343. The Director may apply to a court for directions in respect of any matter concerning the Director's duties under this Act and, on the application, the court may give any directions that it thinks fit.

Notice of refusal by Director

344. (1) The Director must file all documents that are required to be sent to him or her under this Act. If the Director refuses to file any of those documents, the Director must, no later than twenty days after the later of the receipt of the document and the receipt of any approval that may be required under any other law, give written notice of the refusal to the person who sent the document, giving reasons for the refusal.

Deemed refusal

(2) If the Director does not file or give written reasons of refusal to file the documents within the twenty days provided for in subsection (1), the Director is deemed to have refused to file the document.

Appeal from Director's decision

345. A person who feels aggrieved by a decision of the Director referred to in any of paragraphs

(a) to (f) may apply to a court for an order, including an order requiring the Director to change the decision:

(a) to refuse to file in the form submitted any articles or other documents required by this Act to be sent;

(b) to give a name, change or revoke a name or refuse to reserve, accept, change or revoke a name under this Act;

(c) to grant, or to refuse to grant, an exemption that may be granted under this Act and the regulations;

(d) to refuse to issue a certificate of discontinuance or a certificate attesting that as of a certain date the cooperative exists under section 375;

(d.1) to correct, or to refuse to correct, articles, a notice, a certificate or other document under section 376.1;

(d.2) to cancel, or to refuse to cancel, the articles and related certificate under section 376.2;

(e) to issue, or refuse to issue, a certificate of revival or the decision with respect to the terms for revival imposed by the Director; or

(f) to dissolve a cooperative under section 311.

Restraining or compliance order

346. If a cooperative or any director, officer, employee, agent, auditor, trustee, receiver, receiver-manager or liquidator of a cooperative does not comply with the Act, the regulations, the articles, the by-laws or a unanimous agreement, a complainant or the Director may, in addition to any other right, apply to a court for an order directing any such person to comply with or restraining them from acting in breach of it.

On the application, the court may order compliance and make any further order it thinks fit.

Summary application to court

347. When this Act states that a person may apply to a court, the application may be made in any summary manner by petition, originating notice of motion or otherwise as the rules of court provide and subject to any order respecting notice to interested parties or costs or any other order the court thinks fit.

Appeal of final order

348. (1) An appeal lies to the court of appeal of a province from any final order made by a court of that province under this Act.

Appeal on leave

(2) An appeal lies to the court of appeal of a province from any other order made by a court of that province, only with leave of the court of appeal in accordance with the rules of that court.

Offences with respect to this Act

349. (1) Every person who knowingly contravenes section 31, 32 or 33, subsection 165(1), section 166, 168, 169, 172, 251 or 252, subsection 260(2), 264(1) or (3) or 272(5), section 325 or 335 or any other provision of this Act or who does not fulfil a duty imposed under this Act is guilty of an offence punishable on summary conviction.

Offences with respect to the regulations

(2) Every person who, without reasonable cause, contravenes a provision of the regulations or does not fulfill a duty imposed by the regulations is guilty of an offence punishable on summary conviction.

Offences with respect to reports

(3) A person is guilty of an offence punishable on summary conviction if the person knowingly makes or assists in making a report, return, notice or other document required by this Act or the regulations to be sent to the Director or to any other person that

(a) contains an untrue statement of a material fact; or

(b) omits to state a material fact required in it or necessary to make a statement contained in it not misleading in the light of the circumstances in which it was made.

Order to comply

350. (1) If a person is guilty of an offence under this Act or the regulations, the court in which proceedings in respect of the offence are taken may, in addition to any punishment it may impose, order the person to comply with the provisions of this Act or the regulations for the contravention of which the person has been convicted.

Limitation period

(2) A prosecution of an offence under this Act may be instituted at any time within but not later than two years after the time when the subject-matter of the complaint arose.

Civil remedy not affected

(3) No civil remedy for an act or omission is suspended or affected by reason that the act or omission is an offence under this Act.

Alternative resolution

351. The Minister of Agriculture and Agri-Food may, in accordance with any regulations, provide assistance with respect to the alternative resolution of any dispute relating to the affairs of a cooperative.

PART 20

ADDITIONAL PROVISIONS RESPECTING NON-PROFIT HOUSING COOPERATIVES

Application

352. This Part applies to cooperatives for which articles are issued to carry on business as non-profit housing cooperatives.

Requirement of articles

353. The articles of a non-profit housing cooperative must provide that

- (a) the name of the non-profit housing cooperative include the words “non-profit”, “notfor-profit”, “not for profit”, “sans but lucratif” or “à but non lucratif” and “housing cooperative”, “housing co-operative”, “housing co-op”, “coopérative d’habitation”, “coop d’habitation”, “co-op d’habitation”, “coopérative de logement”, “coop de logement” or “co-op de logement”; and
- (b) the business of the cooperative is restricted to that of primarily providing housing to its members.

Special limitations

354. The following restrictions apply to a non-profit housing cooperative:

- (a) it may not issue investment shares;
- (b) it may only issue membership shares on a par-value basis;
- (c) it must in each year conduct at least fifty per cent of its business with its members;
- (d) subject to subsection 357(2), its business must be carried on without the purpose of gain for its members; and
- (e) on its dissolution, and after the payment of its liabilities, its remaining property is to be transferred to or distributed among one or more non-profit housing cooperatives, cooperatives incorporated in a province that have similar objectives and limitations, or charitable organizations.

By-laws

355. (1) The by-laws of a non-profit housing cooperative must include

- (a) any obligation of a member to provide capital to the cooperative and the manner in which the capital is to be contributed;
- (b) any obligation of a member to contribute to charges of the cooperative and the manner in which the charges are to be determined and paid;
- (c) the procedure for determining disputes between members and between members and the cooperative;
- (d) subject to subsection (2), the manner in which the membership of a member may be terminated;
- (e) the manner in which a member’s equity is to be determined on the member’s withdrawal from the cooperative, or on the termination of their membership and on a dissolution of the cooperative and the manner in which that equity is to be repaid;
- (f) a provision for the establishment of adequate reserves and the maintenance of adequate insurance to protect the cooperative from loss; and
- (g) a provision for the establishment of the rules governing charges by the cooperative for the occupation, leasing, subletting and subleasing of housing units of the cooperative.

Termination of membership

(2) If the by-laws provide that membership is to be terminated by the directors, the by-laws must include a right of appeal to the members.

Despite section 40, the by-laws may require that an appeal from the decision of the directors may only be launched within seven days after the member receives notice of the termination of membership.

Other provisions in by-laws

(3) The by-laws of a non-profit housing cooperative may provide

- (a) the rules by which the directors may establish a system of providing subsidies to members for housing charges, provided that the administration of the rules by the directors is fair as among the members; and
- (b) any rules in addition to those specified in paragraph (1)(g) relating to the occupancy of a housing unit of the cooperative.

Member occupancy rights

356. (1) A person who is a member is entitled to occupy the housing unit allocated to them by the non-profit housing cooperative while they are a member, although the directors may, subject to the by-laws, by notice, require the member to occupy an alternate housing unit.

Appeal

(2) A member to whom a notice has been given by the cooperative to occupy an alternate housing unit may appeal that decision in the same manner as that provided for appeals of decisions by the directors to terminate the membership of a member.

Unsuccessful appeal

(3) If an appeal by the member is not successful and the member does not relocate to the alternate housing unit within the time provided by the directors, their membership is deemed to have been terminated and despite section 40 and subsection 356(4), the member has no further appeal.

Occupancy during appeal

(4) Despite section 40, if, in accordance with the by-laws, the directors terminate a member's membership and the member appeals the termination, the member has the right to occupy the housing unit allocated to them until the termination has been confirmed by the members.

Confirmation on appeal

(5) A decision of the directors to terminate the membership of a member is confirmed if the members, at a duly called meeting of the members, do not reverse the directors' decision.

Deemed confirmation

(6) If a meeting of the members is duly called to consider the appeal of a terminated member and a quorum of members is not available for the meeting, the decision of the directors is deemed to be confirmed.

Regaining possession of unit

(7) If a member's membership has been terminated and the member no longer has the right to occupy a housing unit of the cooperative, the cooperative regains possession of the housing unit by consent or by appropriate legal proceedings.

Compensation for occupation past termination date

(8) The cooperative is entitled to compensation for a housing unit that is occupied by a terminated member until it is vacated.

Cooperative not to take other property

(9) The cooperative may not take the property of a member to satisfy amounts due to the cooperative except by consent or by legal proceedings.

Inclusion in bylaws

(10) For the purpose of section 16, the provisions of this section must be included in the by-laws of a non-profit housing cooperative.

Non-profit requirements

357. (1) Subject to subsection (2), but despite any other provision of this Act, a nonprofit housing cooperative may not distribute or pay any of its assets to a member.

Permitted payments

(2) The cooperative may pay a member

- (a) dividends on membership shares paid at a rate that is not more than eight per cent per year and interest on member loans at a rate that is not more than ten per cent per year;
- (b) if the member withdraws from the cooperative or their membership in the cooperative is terminated, or on the dissolution of the cooperative, a sum equal to the member's investment in membership shares or member loans; and
- (c) a reasonable amount for property or services provided by the member to the cooperative.

No other payments permitted

(3) No person may pay or accept compensation for the withdrawal from membership of a member of a non-profit housing cooperative or for any person giving up possession of a housing unit of the cooperative, except as is provided in subsection (2).

Limit on compensation

(4) No person may give or accept, in connection with the allocation or use of a housing unit of the cooperative, compensation that exceeds the housing charges for the housing unit determined in accordance with the by-laws.

Limit on compensation

(5) No person may give or accept, in connection with the allocation or use of a part of a housing unit of the cooperative, compensation that exceeds the amount that, having regard to the portion of the housing unit, would be a reasonable share of the housing charges for the housing unit determined in accordance with the by-laws.

If contravention of subsection (3), (4) or (5)

(6) A person who accepts compensation in contravention of subsection (3), (4) or (5) must pay the amount of the compensation to the cooperative.

Resolution if proposed fundamental change

358. A non-profit housing cooperative may not be a party to a fundamental change to which Part 16 applies unless the change is authorized by a vote of not less than ninety per cent of the members.

PART 21**ADDITIONAL PROVISIONS RESPECTING WORKER COOPERATIVES****Definition of “worker cooperative”**

359. (1) For the purposes of this Part, “worker cooperative” means a cooperative whose prime objectives are to provide employment to its members and to operate an enterprise in which control rests with the members.

Requirements of articles

(2) The articles of a worker cooperative must provide that

- (a) no person may be admitted to membership unless the person is an individual and an employee of the cooperative; and
- (b) the maximum membership investment payable by a person to be a member may not be more than fifty per cent of their expected annual salary during the first year of their membership, unless any amount in excess of that amount is also paid equally by all persons who are members.

Non-member employees

(3) Despite subsection (2), a worker cooperative may provide employment to non-members if, not later than five years after the incorporation of the cooperative or the acquisition of a business by the cooperative, not less than seventy-five per cent of its permanent employees or those of any entity controlled by it are members.

Permanent employees

(4) For the purpose of subsection (3), the following persons are not permanent employees:

- (a) a person who is employed on a probationary period of less than three years; or
- (b) a person who is under contract for a period of less than two years.

By-laws

360. (1) The by-laws of a worker cooperative must include

- (a) any obligation of a member to provide capital to the cooperative, which capital, if required, must be applied fairly to all members;
- (b) subject to subsections (2) and (3), the manner in which the membership of a member may be terminated;
- (c) the procedure for allocating, crediting or distributing any surplus earnings of the cooperative, including that not less than fifty per cent of those earnings must be paid on the basis of the remuneration earned by the members from the cooperative or the labour contributed by the members to the cooperative;
- (d) the period of probation of an applicant for membership, which may not be longer than three years;
- (e) how work is to be allocated;

- (f) a provision for the laying off or suspending of members when there is a lack of work; and
- (g) a provision for the recall of members to work.

Termination of membership

(2) If the by-laws provide that membership is to be terminated by the directors, the by-laws must include a right of appeal to the members.
Despite section 40, the by-laws may require that an appeal from the decision of the directors may only be launched within seven days after the member receives notice of the termination of membership.

Laid-off member

(3) A temporary lay-off of a member does not result in termination of their membership.
After a member has been laid off and two years have elapsed after the date of the lay-off without the member having resumed employment with the cooperative, the directors or the members may, in accordance with the by-laws, terminate the membership of the member.

Confirmation on appeal

(4) A decision of the directors to terminate the membership of a member is confirmed if the members, at a duly called meeting of the members, do not reverse the directors' decision.

Deemed confirmation

(5) If a meeting of the members is duly called to consider the appeal of a terminated member and a quorum of members is not available for the meeting, the directors must call a second meeting to be held, despite section 52, not later than seven days after the first meeting.
If, at the second meeting, there is no quorum of members, the decision of the directors is deemed to be confirmed.

Absence de quorum

Name

361. (1) The articles of a worker cooperative must provide that the name of the worker cooperative include the words "worker cooperative", "worker co-operative", "worker co-op", "coopérative de travailleurs", "coop de travailleurs", "co-op de travailleurs", "cooperative de travail", "coop de travail" or "co-op de travail".

Directors

- (2) Despite anything in this Act,
- (a) not less than eighty per cent of the directors of a worker cooperative must be members that are employees of the cooperative; and
 - (b) the general manager of a worker cooperative may be a director.

Reorganization

(3) A worker cooperative may not be a party to a fundamental change to which Part 16 applies unless the change is authorized by a vote of not less than ninety per cent of the members.

Dissolution

(4) Unless otherwise provided in the articles, on dissolution of a worker cooperative, not less than twenty per cent of the surplus of the cooperative, after the payment of its liabilities, must be distributed to another cooperative, a non-profit entity or a charitable entity before any distribution is made to a member or shareholder.

PART 21.1

DOCUMENTS IN ELECTRONIC OR OTHER FORM

Definitions

361.1 The definitions in this section apply in this Part.

"electronic document" means, except in section 361.6, any form of representation of information or of concepts fixed in any medium in or by electronic, optical or other similar means and that can be read or perceived by a person or by any means.

"information system" means a system used to generate, send, receive, store or otherwise process an electronic document.

Application 361.2 This Part does not apply to a notice, document or other information sent to or issued by the Director pursuant to this Act or to any prescribed notice, document or other information.

Use not mandatory

361.3 (1) Nothing in this Act or the regulations requires a person to create or provide an electronic document.

Consent and other requirements

(2) Despite anything in this Part, a requirement under this Act or the regulations to provide a person with a notice, document or other information is not satisfied by the provision of an electronic document unless

(a) the addressee has consented, in the manner prescribed, and has designated an information system for the receipt of the electronic document; and

(b) the electronic document is provided to the designated information system, unless otherwise prescribed.

Revocation of consent

(3) An addressee may revoke the consent referred to in paragraph (2)(a) in the manner prescribed.

Creation and provision of information

361.4 A requirement under this Act or the regulations that a notice, document or other information be created or provided is satisfied by the creation or provision of an electronic document if

(a) the by-laws or the articles of the cooperative do not provide otherwise; and

(b) the regulations, if any, have been complied with.

Creation of information in writing

361.5 (1) A requirement under this Act or the regulations that a notice, document or other information be created in writing is satisfied by the creation of an electronic document if, in addition to the conditions in section 361.4,

(a) the information in the electronic document is accessible so as to be usable for subsequent reference; and

(b) the regulations pertaining to this subsection, if any, have been complied with.

Provision of information in writing

(2) A requirement under this Act or the regulations that a notice, document or other information be provided in writing is satisfied by the provision of an electronic document if, in addition to the conditions set out in section 361.4,

(a) the information in the electronic document is accessible by the addressee and capable of being retained by the addressee, so as to be usable for subsequent reference; and

(b) the regulations pertaining to this subsection, if any, have been complied with.

Copies

(3) A requirement under this Act or the regulations for one or more copies of a document to be provided to a single addressee at the same time is satisfied by the provision of a single version of the electronic document.

Registered mail

(4) A requirement under this Act or the regulations to provide a document by registered mail is not satisfied by the sending of an electronic document unless prescribed.

Statutory declarations and affidavits

361.6 (1) A statutory declaration or an affidavit required under this Act or the regulations may be created or provided in an electronic document if

(a) the person who makes the statutory declaration or affidavit signs it with his or her secure electronic signature;

(b) the authorized person before whom the statutory declaration or affidavit is made signs it with his or her secure electronic signature; and

(c) the requirements of sections 361.3 to 361.5 are complied with.

Definitions

(2) For the purposes of this section, “electronic document” and “secure electronic signature” have the same meaning as in subsection 31(1) of the *Personal Information Protection and Electronic Documents Act*.

Dispositions applicables

Clarification

(3) For the purpose of complying with paragraph (1)(c), the references to an “electronic document” in sections 361.3 to 361.5 are to be read as references to an “electronic document” as defined in subsection 31(1) of the *Personal Information Protection and Electronic Documents Act*.

Signatures

361.7 A requirement under this Act or the regulations for a signature or for a document to be executed, except with respect to a statutory declaration or an affidavit, is satisfied if, in relation to an electronic document, the prescribed requirements pertaining to this section, if any, are met and if the signature results from the application by a person of a technology or a process that permits the following to be proven:

- (a) the signature resulting from the use by a person of the technology or process is unique to the person;
- (b) the technology or process is used by a person to incorporate, attach or associate the person’s signature to the electronic document; and
- (c) the technology or process can be used to identify the person using the technology or process.

PART 22

GENERAL DISPOSITIONS

NOTICES

Notice to members, shareholders and directors

362. (1) A notice or document required by this Act, the regulations, the articles, the bylaws or a unanimous agreement to be sent to a member, shareholder or director may be sent to

- (a) the member at the member’s latest address as shown in the records of the cooperative;
- (b) the shareholder at the shareholder’s latest address as shown in the records of the cooperative or its transfer agent; and
- (c) the director at the director’s latest address as shown in the records of the cooperative or in the last notice sent under section 81 or 91.

Effect of notice

(2) A director named in a notice sent by a cooperative to the Director under section 81 or 91 is presumed for the purposes of this Act to be a director of the cooperative referred to in the notice.

Deemed receipt

(3) A notice or document sent in accordance with subsection (1) to a member, shareholder or director is deemed to have been received seven days after it was sent unless there are reasonable grounds to believe that the member, shareholder or director did not receive the notice or document at that time or at all.

Undelivered notice

(4) If a cooperative sends a notice or document to a member or shareholder in accordance with subsection (1) and the notice or document is returned on two consecutive occasions because the member or shareholder cannot be found, the cooperative is not required to send any further notices or documents to the member or shareholder until the cooperative is informed in writing of their new address.

Notice to a cooperative

363. (1) A notice or document that is required to be sent to a cooperative may be sent to the cooperative’s registered office shown in the last notice of registered office filed with the Director and, if so sent, is deemed to have been received seven days after it was sent unless there are reasonable grounds to believe that the cooperative did not receive the notice or document at that time or at all.

Service on a cooperative

(2) A notice or document that is required to be served on a cooperative may be served on it at the cooperative’s registered office shown in the last notice of registered office filed with the Director.

Waiver of notice

364. When a notice or document is required by this Act or the regulations to be sent, the sending of the notice or document may be waived or the time for the notice or document may be waived or abridged at any time with the consent in writing of the person who is entitled to it.

CERTIFICATES

Certificate of Director

365. (1) When this Act requires or authorizes the Director to issue a certificate or to certify a fact, the certificate must be signed by the Director or by a Deputy Director authorized under section 371.

Evidence

(2) Except in a proceeding under section 312 to dissolve a cooperative, a certificate referred to in subsection (1) or a certified copy of one, when introduced as evidence in a civil, criminal, administrative, investigative or other action or proceeding, is conclusive proof of the facts so certified without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it.

Certificate of cooperative

366. (1) A certificate that is issued on behalf of a cooperative stating a fact that is set out in the articles, the by-laws, a unanimous agreement or the minutes of the meetings of the directors, a committee of directors, the members or the shareholders, or in a trust indenture or other contract to which the cooperative is a party, may be signed by a director, officer or transfer agent of the cooperative.

Proof

(2) When introduced as evidence in a civil, criminal, administrative, investigative or other action or proceeding, the following things are, in the absence of evidence to the contrary, proof of the facts so certified without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the certificate:

- (a) a fact stated in a certificate referred to in subsection (1);
- (b) a certified extract from a securities register or a members' register of a cooperative; and
- (c) a certified copy of minutes or certified extract from minutes of a meeting of members, shareholders, directors or a committee of directors.

Security certificate

(3) An entry in a securities register of, or a security certificate issued by, a cooperative is, in the absence of evidence to the contrary, proof that the person in whose name the security is registered is the owner of the securities described in the register or certificate.

Membership certificate

(4) An entry in a members' register of, or a certificate of membership or a membership share certificate issued by, a cooperative is, in the absence of evidence to the contrary, proof that the person whose name appears in it or on it is a member or owns the membership shares as set out in the membership share certificate or the register.

NOTICES AND DOCUMENTS

Signature of declarations

367. (1) A declaration of the directors provided to the Director in accordance with subsection 285(4) or (5), 287(1), 291(1), 299(2) or 308(2) is sufficient if it is signed by a director or officer authorized to do so by resolution of the directors.

Director may rely on declarations

(2) The Director may, for all purposes of this Act, rely on a declaration provided under paragraph 10(d) or (e) or a declaration of the directors referred to in subsection (1).

Authority to sign notices

(3) The notices referred to in subsections 30(2) and (4), 81(1) and 91(1), and the annual return referred to in subsection 374(1), may be signed by any individual who has the relevant knowledge of the cooperative and who is authorized to do so by the directors, or, in the case of the notice referred to in subsection 81(1), the incorporators.

Execution of documents

(4) Any articles, notice, resolution, requisition, statement or other document required or permitted to be executed or signed by more than one individual for the purposes of this Act may be executed or signed in several documents of like form, each of which is executed or signed by one or more of the individuals.

The documents, when duly executed or signed by all individuals required or permitted, as the case may be, to do so, shall be deemed to constitute one document for the purposes of this Act.

Copies 368. (1) When a notice or document is required to be sent to the Director under this Act, the Director may accept a photostatic or photographic copy of it.

Electronic or other submission of documents, information or fees

(2) Except to the extent that may otherwise be prescribed, notices, documents, information or fees that are authorized or required to be submitted to, or issued by, the Director under this Act may be submitted or issued in electronic or other form in any manner fixed by the Director.

Time of receipt

(3) For the purposes of this Act, a document, information or a fee that is submitted in accordance with subsection (2) is deemed to have been received by the Director at the time provided by the regulations.

Storage of documents or information in electronic or other form

(4) Subject to the regulations, a document or information that is received by the Director under this Act in electronic or other form may be entered or recorded by an information storage device, including a system of mechanical or electronic data processing, that is capable of reproducing stored documents or information in intelligible form within a reasonable time.

When notices or documents need not be sent

369. The Director may, on any conditions that the Director considers appropriate, determine that notices or documents or classes of notices or documents need not be sent to the Director under this Act if they are notices or documents that contain information similar to information contained in notices or documents required to be made public under any other Act of Parliament or under an Act of the legislature of a province.

Proof required by Director

370. (1) The Director may require that a document or a fact stated in a document required by this Act or the regulations to be sent to the Director be verified in accordance with subsection (2).

Form of proof

(2) A document or fact that the Director requires to be verified may be verified by affidavit or by statutory declaration under the *Canada Evidence Act* before any commissioner for oaths or for taking affidavits.

APPOINTMENT OF DIRECTOR

Appointment 371. The Minister may appoint a Director and one or more Deputy Directors to perform the duties and exercise the powers of the Director under this Act.

REGULATIONS

Regulations 372. (1) The Governor in Council may make regulations

(a) providing for anything that by this Act is to be prescribed or provided for by the regulations;

(b) defining, enlarging or restricting the meaning of any word or expression used but not defined in this Act;

(c) prescribing the fees or the manner of determining the fees that may be charged in respect of the filing, verification or copying of a document under this Act or under a regulation made under this Act, or in respect of any services provided by the Director;

(d) respecting the payment of any fees, including the time when and the manner in which the fees are to be paid, the additional fees that may be charged for the late payment of fees and the circumstances in which any fees previously paid may be refunded in whole or in part;

(d.1) prescribing, for the purposes of subsection 58(2.1), a manner of determining the number of investment shares required for a person to be eligible to make a proposal, including the time and manner of determining a value or percentage of the outstanding investment shares;

(d.2) prescribing, for the purposes of paragraph 58(4)(d), the minimum amount of support required in relation to the number of times the person has submitted substantially the same proposal within the prescribed period;

(e) prescribing rules with respect to exemptions permitted by this Act;

(f) prescribing that, for the purpose of paragraph 247(1)(a), the standards as they exist from time to time of an accounting body named in the regulations are to be followed;

(g) prescribing any matter necessary for the purposes of the application of Part 21.1, including the time and circumstances when an electronic document is to be considered to

have been provided or received and the place where it is considered to have been provided or received;

(h) prescribing the manner of, and conditions for, participating in a meeting by means of a telephonic, electronic or other communication facility that permits all participants to communicate adequately with each other during the meeting; and

(i) prescribing, for the purposes of subsection 65(3), the manner of, and conditions for, voting at a meeting of a cooperative by means of a telephonic, electronic or other communication facility.

Incorporation by reference

(2) The regulations may incorporate any material by reference, regardless of its source and either as it exists on a particular date or as amended from time to time.

Incorporated material is not a regulation

(3) Material does not become a regulation for the purposes of the *Statutory Instruments Act* because it is incorporated by reference.

Fee to be paid before service performed

372.1 The fee in respect of the filing, examination, or copying of any document or in respect of any action that the Director is required or authorized to take must be paid to the Director on the filing, examination, or copying or before the Director takes the action in respect of which the fee is payable.

STATEMENTS

Definition of “statement”

373. (1) In this section, “statement” means a statement of intent to dissolve and a statement of revocation of intent to dissolve referred to in section 310.

Execution and filing

(2) When this Act requires that articles or a statement relating to a cooperative be sent to the Director,

(a) the articles or statement must be signed by a director or officer or, in the case of articles of incorporation, by the incorporators; and

(b) on receiving the articles or statement in the form that the Director has fixed, any other required documents and the required fees, the Director must

(i) record the date on which it is received,

(ii) subject to sections 12, 285, 292, 299 and 308, issue the appropriate certificate,

(iii) file the certificate, articles or statement, or a copy, image or photographic, electronic or other reproduction of it,

(iv) send the certificate, or a copy, image or photographic, electronic or other reproduction of it, to the cooperative or its agent, and

(v) publish a notice of the issuance of the certificate in a publication generally available to the public.

Date of certificate

(3) A certificate referred to in subsection (2) that is issued by the Director may be dated as of the date of the receipt of the articles, statement or court order pursuant to which the certificate was issued or as of any later date specified by the court or person who signed the articles or statement.

Signature

(4) A signature required on a certificate issued by the Director under this Act may be printed or otherwise reproduced on the certificate or may be made in accordance with the regulations.

Date of certificate

(5) Despite subsection (3), a certificate of discontinuance may be dated as of the day a cooperative amalgamates under another Act or is continued.

Annual return

374. Every cooperative must send the Director an annual return in the form, and on the date, that the Director fixes.

Certificate

375. (1) The Director may provide any person with a certificate that a cooperative

(a) has sent to the Director a document required to be sent;

- (b) has paid all required fees; or
- (c) exists as of a certain date.

Director may refuse to issue certificate of existence

(2) For greater certainty, the Director may refuse to issue a certificate under paragraph (1)(c) if the Director has knowledge that the cooperative is in default of sending a document required to be sent or is in default of paying a required fee.

Alteration

376. The Director may alter a notice or document, other than an affidavit or statutory declaration, if authorized to do so by the person who sent the document or by their representative.

Corrections at request of Director

376.1 (1) If there is an error in articles, a notice, a certificate or other document, the directors, members or shareholders must, on the request of the Director, pass the resolutions and send to the Director the documents required to comply with this Act, and take any other steps that the Director may reasonably require so that the Director may correct the document.

No prejudice

(2) Before proceeding under subsection (1), the Director must be satisfied that the correction would not prejudice any of the members, shareholders or creditors of the cooperative.

Corrections at the request of the cooperative

(3) The Director may, at the request of the cooperative or of any other interested person, accept a correction to any of the documents referred to in subsection (1) if

- (a) the correction is approved by the directors of the cooperative, unless the error is obvious or was made by the Director; and
- (b) the Director is satisfied that the correction would not prejudice any of the members, shareholders or creditors of the cooperative and that the correction reflects the original intention of the cooperative or the incorporators, as the case may be.

Application to court

(4) If, in the view of the Director, of the cooperative or of any interested person who wishes a correction, a correction to any of the documents referred to in subsection (1) would prejudice any of the members, shareholders or creditors of a cooperative, the Director, the cooperative or the person, as the case may be, may apply to the court for an order that the document be corrected and for an order determining the rights of the members, shareholders or creditors.

Notice to Director

(5) An applicant under subsection (4) must give the Director notice of the application, and the Director is entitled to appear and to be heard in person or by counsel.

Director may require surrender of document

(6) The Director may demand the surrender of the original document, and may issue a corrected certificate or file the corrected articles, notice or other document.

Date of corrected document

(7) A corrected document must bear the date of the document it replaces unless

- (a) the correction is made with respect to the date of the document, in which case the document must bear the corrected date; or
- (b) the court decides otherwise.

Notice

(8) If a corrected certificate materially amends the terms of the original certificate, the Director must without delay give notice of the correction in a publication generally available to the public.

Cancellation of articles by Director

376.2 (1) In the prescribed circumstances, the Director may cancel the articles and related certificate of a cooperative.

No prejudice

(2) Before proceeding under subsection (1), the Director must be satisfied that the cancellation would not prejudice any of the members, shareholders or creditors of the cooperative.

Request to Director to cancel articles

(3) In the prescribed circumstances, the Director may, at the request of a cooperative or of any other interested person, cancel the articles and related certificate of the cooperative if

- (a) the cancellation is approved by the directors of the cooperative; and
- (b) the Director is satisfied that the cancellation would not prejudice any of the members, shareholders or creditors of the cooperative and that the cancellation reflects the original intention of the cooperative or the incorporators, as the case may be.

Application to court

(4) If, in the view of the Director, of the cooperative or of any interested person who wishes a cancellation, a cancellation of articles and a related certificate would prejudice any of the members, shareholders or creditors of a cooperative, the Director, the cooperative or the person, as the case may be, may apply to the court for an order that the articles and certificate be cancelled and for an order determining the rights of the members, shareholders or creditors.

Notice to Director

(5) An applicant under subsection (4) must give the Director notice of the application, and the Director is entitled to appear and to be heard in person or by counsel.

Return of certificate

(6) The Director may demand the surrender of a cancelled certificate.

Inspection

377. (1) A person who has paid the required fee is entitled during usual business hours to examine a document required by this Act or the regulations to be sent to the Director, except a report sent under subsection 330(2), and to make copies of it or take extracts from it.

Copies and extracts

(2) The Director must provide any person with a copy, extract, certified copy or certified extract of a document required by this Act or the regulations to be sent to the Director, except a report sent under subsection 330(2).

RECORDS**Records of Director**

378. (1) Records required by this Act to be maintained by the Director may be in bound or loose-leaf form or in photographic film form, or may be entered or recorded by a system of mechanical or electronic data processing or by any other information storage device that is capable of reproducing any required information in intelligible written form within a reasonable time.

Obligation

(2) If records that are maintained by the Director are maintained other than in written form,

- (a) the Director must provide any copy required to be provided under subsection 377(2) in intelligible written form; and
- (b) a report reproduced from those records, if it is certified by the Director, is admissible in evidence to the same extent as the original written records would have been.

Retention of records

(3) The Director is not required to produce any document, other than a certificate and attached articles or statement filed under section 373, after the expiration of the prescribed period.

Form of publication

(4) Information or notices required by this Act to be summarized in a publication generally available to the public or to be published by the Director may be made available to the public or published by a system of mechanical or electronic data processing or any other information storage device that is capable of reproducing any required information or notice in intelligible form within a reasonable time.

PART 23

CONTINUANCE

Continuance under this Act

379. (1) Subject to paragraphs 7(3)(b) and (c), on the coming into force of this subsection, (a) each former Act cooperative is deemed to be a cooperative incorporated under this Act; (b) any provision contained in the articles of association and the charter by-laws of a former Act cooperative that is required to be contained in the articles of incorporation of a cooperative under this Act is deemed to be contained in the articles of that cooperative; and (c) any share that has been issued by the cooperative that is not a membership share is deemed to be an investment share.

Amendment to articles

(2) Each former Act cooperative must, not later than five years after the coming into force of this subsection, amend its articles so that they comply with section 11 and file them with the Director.

Failure to comply

(3) If a cooperative referred to in subsection (1) does not comply with subsection (2), the Director may, after giving not less than one hundred and eighty days notice after the end of the five years to the cooperative, dissolve the cooperative.

No member or shareholder rights

(4) Any amendment to the articles of a cooperative to comply with subsection (2) does not give rise to any rights by a member or shareholder under section 302.

PART 24

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, REPEAL AND COMING INTO FORCE

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

380. to 384. [Amendments]

REPEAL

385. [Repeal]

COMING INTO FORCE

Coming into force

***386.** This Act or any of its provisions or any provision of an Act enacted by this Act comes into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

AMENDMENTS NOT IN FORCE

312. Subsection 3(4) of the *Canada Cooperatives Act* is replaced by the following:

Non-application of certain Acts

(4) No provision of the *Canada Business Corporations Act*, the *Canada Corporations Act*, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970, the *Canada Not-for-profit Corporations Act* or the *Winding-up and Restructuring Act* applies to a cooperative.

347. On the day on which paragraph 313(a) comes into force, subsection 3(4) of the *Canada Cooperatives Act* is replaced by the following:

Non-application of certain Acts

(4) No provision of the *Canada Business Corporations Act*, the *Canada Not-for-profit Corporations Act* or the *Winding-up and Restructuring Act* applies to a cooperative.

Non-application de certaines lois — 2010, c. 12, s. 2113 — 2010, ch. 12, art. 2113

2113. Section 285 of the *Canada Cooperatives Act* is amended by adding the following after subsection (11):

Federal credit union

(11.1) If a federal credit union, within the meaning of section 2 of the *Bank Act*, is continued as a cooperative under this Act,

(a) its membership shares are deemed to be membership shares to which are attached the rights, privileges and restrictions set out in this Act and the articles;

(b) the members of the federal credit union are deemed to be the members of the cooperative; and

(c) any agreement made before continuance under which the members of the federal credit union have agreed to vote in a manner provided in the agreement is of no effect.

4.9. CHILE

• LEY GENERAL DE COOPERATIVAS

Fecha Publicación :17-02-2004

Fecha Promulgación :25-09-2003

Organismo :MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN;
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN

Título: FIJA TEXTO REFUNDIDO, CONCORDADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY
GENERAL DE COOPERATIVAS

Inicio Vigencia :05-06-2007

Ultima Modificación :05-JUN-2007 Ley 20190

Teniendo presente:

Que el artículo 2º de la ley N° 19.832, facultó al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de la misma, proceda a fijar el texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas, con el contenido del Reglamento de Reforma Agraria N° 20, de 1963, el de la misma ley y el de los demás textos legales que se refieran a cooperativas.

Visto:

Lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política de la República, y las facultades que me confiere el artículo 2º de la Ley 19.832, dicto el siguiente Decreto con Fuerza de Ley:

Artículo único.- Fíjase el siguiente texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas, cuyo texto vigente consta en el decreto supremo N° 502, de 1978, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. El texto que se fija a continuación se denominará:

LEY GENERAL DE COOPERATIVAS

CAPITULO I

DISPOSICIONES COMUNES A TODA CLASE DE COOPERATIVAS

TITULO I

De la naturaleza de las Cooperativas

Artículo 1º: Para los fines de la presente ley son cooperativas las ART. 1º N° 1 asociaciones que de conformidad con el principio de la ayuda mutua tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de sus socios y presentan las siguientes características fundamentales:

Los socios tienen iguales derechos y obligaciones, un solo voto por persona y su ingreso y retiro es voluntario.

Deben distribuir el excedente correspondiente a operaciones con sus socios, a prorrata de aquéllas.

Deben observar neutralidad política y religiosa, desarrollar actividades de educación cooperativa y procurar establecer entre ellas relaciones federativas e intercooperativas.

Artículo 2º: Las cooperativas pueden tener por objeto cualquier actividad y estarán sujetas a las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, en cuanto a las operaciones propias de su giro, las cooperativas se sujetarán, en lo que les sea aplicable, a la regulación y fiscalización establecida por leyes especiales que rijan a la actividad económica que constituya su objeto.

Artículo 3º: Las cooperativas, de acuerdo a sus estatutos, podrán combinar finalidades de diversas clases, salvo las que deban tener objeto único como las cooperativas de vivienda abiertas, las de ahorro y crédito y cualquier otra que establezca la ley.

Artículo 4º: Las cooperativas podrán operar con terceros. Sin embargo, no podrán establecer con ellos combinaciones o acuerdos que hagan participar a éstos directa o indirectamente de los beneficios tributarios o de otro orden que la presente ley otorga a estas entidades.

TITULO II

De la Constitución de las Cooperativas

Artículo 5° : Las cooperativas que se organicen con arreglo a la presente ley gozarán de personalidad jurídica.

La razón social deberá contener elementos indicativos de la naturaleza cooperativa de la institución, los cuales podrán omitirse en la sigla o denominación de fantasía que se adopte.

Ninguna cooperativa podrá adoptar una razón social idéntica a la de otra preexistente. La inclusión en la razón social de una referencia a su objeto no será suficiente para determinar que no existe identidad en la misma.

Artículo 6°: El acta de la Junta General Constitutiva, que deberá ser reducida a escritura pública, deberá expresar el nombre, profesión o actividad, domicilio y cédula nacional de identidad de los socios que concurren a su constitución. Asimismo, deberá constar en ésta, la aprobación de los estatutos y el texto íntegro de éstos.

El estatuto deberá contener, con sujeción a esta ley y al reglamento, las siguientes menciones mínimas:

- a) Razón social, domicilio y duración de la cooperativa. En el evento de no señalar duración, se entenderá que ésta es indefinida. Si no señala domicilio, se entenderá domiciliada en el lugar de otorgamiento del instrumento de su constitución;
- b) El o los objetos específicos que perseguirá;
- c) Capital inicial suscrito y pagado; forma y plazo en que será enterado, en su caso; número inicial de cuotas que deberán ser múltiplos de cien, en que se divide el capital y la indicación y valoración de todo aporte que no consista en dinero;
- d) La forma en que la cooperativa financiará sus gastos de administración; el organismo interno que fijará los aportes; la constitución de reservas y la política de distribución de remanentes y excedentes; la información mínima obligatoria que se entregará periódicamente y al momento del ingreso de los socios a la cooperativa; las limitaciones al derecho de renuncia a la cooperativa y las modalidades relativas a la devolución de los aportes de capital efectuados por los socios;
- e) Requisitos para poder ser admitido como socio; derechos y obligaciones, y causales de exclusión de los mismos;
- f) Periodicidad y fecha de celebración y formalidades de convocatoria de las Juntas Generales de Socios, las que, en todo caso, deberán celebrarse a lo menos una vez al año dentro del cuatrimestre siguiente a la confección del balance;
- g) Materias que serán objeto de Juntas Generales de Socios; determinación de los quórumos mínimos para sesionar y del número de votos necesarios para adoptar acuerdos, tanto de carácter general como los que requieran por su importancia de normas especiales, como aquellos a que se refiere el artículo 41 de esta ley;
- h) Número de miembros del Consejo de Administración, plazo de duración de los consejeros en sus cargos, y si podrán o no ser reelegidos, si la renovación de los consejeros se hará por parcialidades o en su totalidad; periodicidad de celebración y formalidades de convocatoria de las sesiones del Consejo; materias que serán objeto de sesiones ordinarias y extraordinarias; quórumos mínimos para sesionar y adoptar acuerdos de carácter general o sobre materias que por su importancia requieran de normas especiales, e
- i) Las demás que establezca el Reglamento.

Artículo 7°: Un extracto de la escritura social, autorizado por el Notario respectivo, deberá inscribirse en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces correspondiente al domicilio de la Cooperativa, y publicarse por una sola vez en el Diario Oficial.

Dicho extracto deberá expresar, a lo menos, la razón social, domicilio y duración de la cooperativa, la enunciación de su objeto, el número de los socios que concurrieron a su constitución, el capital suscrito y pagado, el nombre y domicilio del notario ante el cual se redujo a escritura pública el acta, y la fecha de la escritura.

La inscripción y publicación a que se refieren los incisos precedentes, deberán efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la reducción a escritura pública del Acta de la Junta General Constitutiva.

Artículo 8°: Las actas de las Juntas Generales de Socios en las que se acuerde una reforma del estatuto o la fusión, división, transformación o disolución de las cooperativas, y sus extractos, se regirán por lo dispuesto en los artículos precedentes. En estos casos, en el extracto respectivo será necesario hacer referencia al contenido específico del acuerdo, además de expresar la razón social de la cooperativa, el nombre y

domicilio del notario ante el cual se haya reducido a escritura pública el acta y la fecha de dicha escritura.

Artículo 9°: La cooperativa en cuya escritura de constitución se omita lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6° o cualquiera de las menciones exigidas en las letras a), b) y c) del mismo artículo; o cuyo extracto haya sido inscrito o publicado tardíamente o no haya cumplido con el resto de las exigencias del artículo 7°, es nula, sin perjuicio del saneamiento en conformidad a la ley.

Las reformas de estatutos y los acuerdos de fusión, división, transformación o disolución de las cooperativas, siempre que consten de escritura pública, de instrumento reducido a escritura pública o protocolizado, y cuyos respectivos extractos hayan sido oportunamente inscritos y publicados, adolecerán de la misma nulidad establecida en el inciso primero, si en éstos se omiten cualquiera de las menciones exigidas en el artículo 8° de esta ley. Sin embargo estas reformas y acuerdos producirán efectos frente a los socios y terceros mientras no haya sido declarada su nulidad.

La declaración de estas nulidades no producirá efecto retroactivo y será aplicable a las situaciones que ocurran a partir del momento en que quede ejecutoriada la resolución que la contenga; todo sin perjuicio del saneamiento que proceda en conformidad a la ley.

Se equiparará a la omisión, cualquiera disconformidad esencial que exista entre la escritura de constitución o de los acuerdos a que se refiere el inciso anterior y la respectiva inscripción o publicación de su extracto. Se entiende por disconformidad esencial aquella que induce a una errónea comprensión de la escritura extractada.

Declarada la nulidad de la cooperativa, ésta entrará en liquidación, subsistiendo la personalidad jurídica para tal efecto. La liquidación se efectuará conforme a lo dispuesto por el artículo 47 de esta ley.

Los otorgantes del pacto declarado nulo responderán solidariamente a los terceros con quienes hubieren contratado a nombre y en interés de la cooperativa. Asimismo los terceros que contraten con una cooperativa que no ha sido legalmente constituida, no podrán sustraerse en razón de la nulidad al cumplimiento de sus obligaciones.

La nulidad de la constitución de una cooperativa o de las reformas o acuerdos a que se refiere el artículo 8° de esta ley, derivada de omisiones que adolezca el extracto inscrito y publicado, o de disconformidades esenciales entre éste y la correspondiente escritura pública, o de defectos en la convocatoria o desarrollo de juntas de socios, no podrá ser invocada después de dos años contados desde la fecha del otorgamiento de la escritura respectiva. Esta prescripción correrá contra toda persona y no admitirá suspensión alguna. Vencido ese plazo, las disposiciones de la escritura prevalecerán sobre las del extracto.

Artículo 10°: Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, la cooperativa que no conste por escritura pública, ni en instrumento reducido a escritura pública, o cuyo extracto no haya sido inscrito o publicado, es nula de pleno derecho y no podrá ser saneada.

La existencia de hecho, dará lugar a una comunidad entre sus miembros y las ganancias y pérdidas se repartirán y soportarán y la restitución de los aportes se efectuará entre ellos con arreglo a lo pactado. A falta de pacto regirá lo establecido en esta ley y su reglamento.

Los miembros de la comunidad responderán solidariamente a los terceros con quienes hubieren contratado a nombre y en interés de ésta y no podrán oponer a los terceros la falta de los instrumentos mencionados en el inciso primero. Los terceros podrán acreditar la existencia de hecho de la cooperativa por cualquiera de los medios probatorios que reconoce el Código de Comercio y la prueba será apreciada de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Las reformas de estatutos y los acuerdos de fusión, división, transformación o disolución de las cooperativas, que no consten por escritura pública, ni en instrumento reducido a escritura pública, o cuyos respectivos extractos no hayan sido inscritos o publicados, no producirán efectos ni frente a los socios ni frente a terceros, de pleno derecho, sin perjuicio de la acción por enriquecimiento sin causa que proceda. Todo lo anterior será sin perjuicio del saneamiento en conformidad a la ley y con las restricciones que ésta impone.

Artículo 11: Serán aplicables a los actos de constitución o de modificación de las cooperativas que se constituyan en el futuro o que se hayan constituido con anterioridad a esta ley, además de las disposiciones específicas que ella contiene sobre saneamiento de vicios de nulidad, las disposiciones de la Ley N° 19.499.

Para los efectos de dicha ley se entenderá por modificación de la cooperativa tanto la reforma de sus estatutos, como su fusión, división, transformación o disolución, debiendo aplicarse a su respecto los procedimientos y normas establecidos para las sociedades anónimas.

Artículo 12: Los interesados en formar cooperativas de ahorro y crédito y abiertas de vivienda deberán someter a la aprobación del Departamento de Cooperativas un estudio socioeconómico sobre las condiciones, posibilidades financieras y planes de trabajo que se proponen desarrollar. En caso de rechazo podrá reclamarse ante el Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de recepción del oficio mediante el cual se haya rechazado el estudio socioeconómico. El Departamento de Cooperativas tendrá un plazo de 60 días para formular observaciones u objeciones al estudio socioeconómico; si no se formularan dentro de dicho plazo, el estudio se tendrá por aprobado.

La junta general constitutiva de las cooperativas mencionadas en el inciso precedente se deberá celebrar con posterioridad a la aprobación del respectivo estudio socioeconómico.

TITULO III

De los Socios de las Cooperativas

Artículo 13: Salvo los casos especialmente previstos en esta ley, el número de socios de una cooperativa será ilimitado, a partir de un mínimo de diez.

Si el número de socios de una cooperativa se redujere a un número inferior al mínimo señalado en el inciso anterior, se le concederá un plazo de seis meses para completarlo. En caso de no lograrlo quedará disuelta por el solo ministerio de la ley, debiendo los directores o el gerente publicar el hecho de su disolución en el Diario Oficial, dentro de los sesenta días siguientes al vencimiento del plazo de seis meses antes referido y, además, subinscribir la disolución al margen de la inscripción en el Registro de Comercio respectivo, dentro del mismo plazo. Los directores o el gerente que no cumplan con esta obligación, serán solidariamente responsables de los perjuicios que causen a terceros en razón de la falta de la publicación o subinscripción.

Podrán ser socios de una cooperativa las personas naturales y las personas jurídicas de derecho público o privado.

Artículo 14: Los socios de las cooperativas podrán pertenecer a dos o más entidades de igual finalidad, salvo que sus estatutos lo prohiban.

Siempre que sea compatible con la naturaleza del objeto de la cooperativa los estatutos autorizarán que los herederos del socio fallecido continúen como miembros de la cooperativa como comunidad indivisa, debiendo designar un procurador común que los represente.

La persona que sea socio de más de una cooperativa de igual finalidad, sólo podrá desempeñar cargos directivos en una de ellas.

Los estatutos de las cooperativas podrán prohibir que sus socios efectúen, dentro de la zona de funcionamiento que señalan, operaciones de la misma índole de las que la respectiva cooperativa ejecute.

Artículo 15: La adquisición, el ejercicio y la pérdida de la calidad de socio y las prestaciones mutuas a que haya lugar por estas causas, se regirán por los estatutos conforme a las normas de la presente ley. El reglamento que se dicte será, en esta materia, supletorio de las disposiciones estatutarias.

Artículo 16: Las cooperativas podrán suspender transitoriamente el ingreso de socios, cuando sus recursos sean insuficientes para atenderlos. No podrá limitarse el ingreso de socios por razones políticas, religiosas o sociales, sin perjuicio del derecho del consejo de administración de calificar el ingreso de socios.

Artículo 17: Ningún socio podrá ser propietario de más de un 20% del capital de una cooperativa, salvo en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, en las que el máximo permitido será de un 10%.

Artículo 18: La persona que adquiera la calidad de socio, responderá con sus aportes de las obligaciones contraídas por la cooperativa antes de su ingreso. Toda estipulación en contrario es nula.

Artículo 19: La persona que haya perdido la calidad de socio por renuncia o exclusión y los herederos del socio fallecido tendrán derecho a la devolución del monto actualizado de sus cuotas de participación, con las modalidades establecidas en los estatutos. La renuncia sólo podrá ser rechazada en los casos previstos en los estatutos o en otras normas aplicables a las cooperativas.

La adopción de alguno de los acuerdos señalados en las letras e), g), h), m) y n) del artículo 23, y la modificación sustancial del objeto social, como por ejemplo aquella que

implique la realización de nuevas actividades no relacionadas directa o indirectamente con el objeto original, concederá derecho al socio disidente a retirarse de la cooperativa, la que no podrá rechazar la renuncia en ningún caso.

Se considerará socio disidente a aquél que en la respectiva junta se hubiere opuesto al acuerdo pertinente o que, no habiendo concurrido a la junta, manifieste su disidencia por escrito a la cooperativa, dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha en que se adoptó el acuerdo.

El socio disidente que se retire de la cooperativa tendrá derecho a que se le pague dentro del plazo de 90 días o en el plazo señalado en los estatutos, si fuere inferior, a contar de la fecha de presentación de la solicitud de retiro, el valor de sus cuotas de participación.

El derecho a retiro deberá ser ejercido dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que la junta general de socios haya adoptado el acuerdo que lo motiva, mediante comunicación escrita dirigida a la cooperativa en la que el socio deberá expresar claramente su voluntad de retirarse por estar en desacuerdo con la decisión de la junta respectiva. Dicha comunicación deberá enviarse por carta certificada o por intermedio de un notario público que así lo certifique. No se exigirá esta formalidad cuando el gerente o quien haga sus veces deje constancia escrita de la recepción de la comunicación referida.

El consejo de administración podrá convocar a una nueva junta general que deberá celebrarse a más tardar dentro de los treinta días siguientes contados desde el vencimiento del plazo para ejercer el derecho a retiro, a fin de que se reconsidere o ratifique los acuerdos que motivaron su ejercicio. Si en dicha junta se revocaren los mencionados acuerdos, caducará el referido derecho a retiro. Si se ratificaren dichos acuerdos, no se abrirá un nuevo plazo para ejercerlo.

TITULO IV

De la Dirección, Administración y Vigilancia de las Cooperativas

Artículo 20: La dirección, administración, operación y vigilancia de las cooperativas estarán a cargo de:

- a) La Junta General de Socios
- b) El Consejo de Administración
- c) El Gerente
- d) La Junta de Vigilancia

Artículo 21: La Junta General de Socios es la autoridad suprema de la cooperativa. Estará constituida por la reunión de los socios que figuren debidamente inscritos en el registro social los acuerdos que adopte, con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias, serán obligatorios para todos los miembros de la cooperativa.

Artículo 22: En las Juntas Generales, cada socio tendrá derecho a un voto, tanto en lo que se refiere a la elección de personas, cuanto en lo relativo a las proposiciones que se formulen.

Los poderes para asistir con derecho a voz y voto a ellas, deberán otorgarse por carta poder simple. No podrán ser apoderados los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia, el Gerente y los trabajadores de las Cooperativas.

Los apoderados deberán ser socios de la cooperativa, salvo que se trate del cónyuge o hijos del socio, o de administradores o trabajadores de éstos, en cuyo caso el poder que se otorgue deberá ser autorizado ante notario.

Ningún socio podrá representar a más de un 5% de los socios presentes o representados en una asamblea general.

Los estatutos de una cooperativa podrán disponer que la asistencia a Junta sea personal y que no se acepte, en ningún caso, mandato para asistir a ellas.

No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, cuando así lo establezcan los estatutos, las Juntas Generales de las Cooperativas de primer grado podrán constituirse por delegados, en los siguientes casos:

- a) Cuando la cooperativa actúe a través de establecimientos ubicados en diversos lugares del territorio nacional, y
- b) Cuando la cooperativa tenga más de dos mil socios.

Los delegados serán elegidos antes de la Junta General de Socios y permanecerán en sus cargos el tiempo que se señale en los estatutos, no pudiendo en caso alguno prolongarse su período más allá de un año.

Para ser delegado se requerirá ser socio de la cooperativa. Los delegados podrán ser reelegidos indefinidamente.

Artículo 23: Son materia de Junta General de Socios:

- a) El examen de la situación de la cooperativa y de los informes de las juntas de vigilancia y auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras presentadas por los administradores o liquidadores de la cooperativa.
- b) La distribución de los excedentes o remanentes de cada ejercicio.
- c) La elección o revocación de los miembros del consejo de administración, de los liquidadores y de la junta de vigilancia.
- d) La disolución de la cooperativa.
- e) La transformación, fusión o división de la cooperativa.
- f) La reforma de sus estatutos.
- g) La enajenación de un 50% o más de su activo, sea que incluya o no su pasivo; como asimismo la formulación o modificación de cualquier plan de negocios que contemple la enajenación de activos por un monto que supere el porcentaje antedicho. Para estos efectos se presume que constituyen una misma operación de enajenación, aquellas que se perfeccionen por medio de uno o más actos relativos a cualquier bien social, durante cualquier período de 12 meses consecutivos.
- h) El otorgamiento de garantías reales o personales para caucionar obligaciones de terceros, excepto si éstos fueren entidades filiales, en cuyo caso la aprobación del Consejo de Administración será suficiente. Son entidades filiales aquellas organizaciones en que una cooperativa controla directamente, o a través de otra persona natural o jurídica, más del 50% de su capital.
- i) La aprobación de aportes de bienes no consistentes en dinero y estimación de su valor.
- j) El cambio de domicilio social a una región distinta.
- k) La modificación del objeto social.
- l) La modificación de la forma de integración de los órganos de la Cooperativa y de sus atribuciones.
- m) El aumento del capital social, en caso de que sea obligatorio que los socios concurran a su suscripción y pago de las cuotas de capital respectivas.
- n) La adquisición por parte de las cooperativas de la calidad de socias de sociedades colectivas y de socio gestor de sociedades en comandita y la celebración de cualquier contrato que genere la responsabilidad por obligaciones de terceros, salvo que ellos sean una entidad filial de la cooperativa.
- ñ) La fijación de remuneración, participación o asignaciones en dinero o especies que correspondan, en razón de sus cargos, a los miembros del consejo de administración, junta de vigilancia o cualquier otro comité de socios que se establezca en los estatutos.
- o) Las demás materias que por ley o por los estatutos correspondan a su conocimiento o a la competencia de las juntas generales de socios y, en general, cualquier materia que sea de interés social.

Requerirán la conformidad de los dos tercios de los socios presentes o representados en la junta general respectiva los acuerdos relativos a las materias de las letras d), e), g), h), i), j), k), l), m), y n), los que deberán ser tratados sólo en juntas generales especialmente citadas con tal objeto.

Los acuerdos relativos a las demás materias de conocimiento de la junta general se adoptarán por la mayoría simple de los socios presentes o representados en ella.

La citación a junta se efectuará por medio de un aviso de citación, que se publicará con una anticipación de no más de 15 días ni menos de 5 días de la fecha en que se realizará la junta, en un diario de circulación en la zona en que la

cooperativa tenga operaciones, o bien, en un diario de circulación nacional. Deberá enviarse, además, una citación por correo a cada socio, al domicilio que éste haya registrado en la cooperativa, con una anticipación mínima de 15 días a la fecha de celebración de la junta, la que deberá contener una referencia a las materias a ser tratadas en ella y las demás menciones que señale el reglamento.

Artículo 24: El consejo de administración, que será elegido por la junta general de socios, tiene a su cargo la administración superior de los negocios sociales y representa judicial y extrajudicialmente a la cooperativa para el cumplimiento del objeto social, sin perjuicio de la representación que compete al gerente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de esta ley.

Los estatutos podrán contemplar la existencia de consejeros suplentes.

Las cooperativas podrán contemplar en sus estatutos cláusulas que confieran a las personas jurídicas de derecho público o privado que participen en ellas el derecho a designar un determinado número de miembros del consejo de administración, pero en todo caso este privilegio se limitará a una minoría de los mismos.

Las cooperativas podrán contemplar en sus estatutos la participación de sus trabajadores en el consejo de administración. Los consejeros laborales gozarán del fuero establecido en el artículo 174 del Código del Trabajo, desde la fecha de su elección y hasta 6 meses después de haber cesado en el cargo, siempre que la cesación en él no se hubiere producido por censura de la asamblea de los trabajadores, por sanción aplicada por el

tribunal competente en cuya virtud deba hacer abandono del mismo, o por término de la empresa.

A lo menos, el 60% de los integrantes titulares y suplentes del consejo de administración deberá ser elegido por los socios usuarios de la cooperativa.

El consejo de administración, con sujeción a las normas que señalen el Reglamento y los estatutos sociales, podrá delegar parte de sus facultades en el gerente o en uno o más consejeros o funcionarios de la cooperativa y podrá, asimismo, delegarlas en otras personas para fines especialmente determinados.

Artículo 25: Los consejeros, los gerentes, los socios administradores a que se refiere el inciso primero del artículo 61 y los miembros del comité organizador y de la comisión liquidadora o el liquidador, según el caso, responderán hasta de la culpa leve en el ejercicio de sus funciones, y serán responsables solidariamente de los perjuicios que causen a la cooperativa por sus actuaciones dolosas o culposas.

La aprobación otorgada por la junta general a la memoria y balance que aquellos presenten, o a cualquier cuenta o información general no los libera de la responsabilidad que les corresponda por actos o negocios determinados; ni la aprobación específica de éstos los exonera de aquella responsabilidad, cuando se hubieren celebrado con culpa o dolo.

Las deliberaciones y acuerdos del Consejo de Administración se transcribirán en un libro de actas por un medio idóneo que ofrezca seguridad de que no podrá haber intercalaciones, supresiones o cualquier otra adulteración que pueda afectar la fidelidad del acta, que será firmada por los consejeros que hubieran concurrido a la sesión.

Si alguno de ellos fallece o se imposibilita por cualquier causa para firmar el acta correspondiente, se dejará constancia en la misma de la respectiva circunstancia o impedimento.

Se entenderá aprobada el acta desde el momento de su firma, conforme a lo expresado en los incisos precedentes y desde esa fecha se podrán llevar a efecto los acuerdos a que ella se refiere.

El consejero que desee salvar su responsabilidad personal deberá hacer constar en el acta su opinión y si estuviere imposibilitado para ello hará una declaración por escrito ante el Departamento de Cooperativas, dentro del plazo de 10 días de celebrada la sesión respectiva o de la fecha en que hubiere cesado la imposibilidad.

El consejero que estime que un acta adolece de inexactitudes u omisiones, tiene el derecho de estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes.

Artículo 26: Se presume la responsabilidad de las personas indicadas en el artículo 25, según corresponda, en los siguientes casos:

1. Si la cooperativa no llevare sus libros o registros;
2. Si se repartieren excedentes cuando ello no corresponda;
3. Si la cooperativa ocultare sus bienes, reconociere deudas supuestas o simulare enajenaciones, y
4. Si la cooperativa no diere cumplimiento a sus obligaciones legales, reglamentarias y estatutarias, y a las instrucciones de los organismos fiscalizadores correspondientes.

Artículo 27: El Gerente es el ejecutor de los acuerdos y órdenes del Consejo de Administración, representará judicialmente a la cooperativa, como a las demás instituciones regidas por esta ley sin perjuicio de lo establecido en el artículo 24 y sus atribuciones y deberes serán fijados en los estatutos, sin que ello obste a que, en todo caso, ejerza activa y pasivamente las facultades a) y b) fijadas en el artículo 8º del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 28: La Junta General nombrará una Junta de Vigilancia que estará compuesta hasta por 5 miembros, pudiendo ser hasta 2 de ellos personas ajenas a la cooperativa, que cumplan los requisitos que establezca el reglamento.

Dicha junta tendrá por objeto examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros y las demás atribuciones que se establezcan en los estatutos y en el reglamento.

No podrá la Junta de Vigilancia intervenir en los actos del Consejo de Administración y del Gerente. La Junta de Vigilancia, con autorización de la Junta General, podrá llevar a cabo todas o parte de sus funciones a través de una confederación, federación o instituto auxiliar de cooperativas que disponga de servicios de auditoría o de una firma privada de auditores.

En caso de que la mayoría de los miembros de la Junta de Vigilancia determine que la cooperativa ha actuado en contravención a las normas de esta ley, de su reglamento o de los estatutos, ésta deberá exigir la celebración en un plazo no mayor a 15 días, contado desde la fecha del acuerdo, de una junta general de socios, donde se informará de esta

situación. La junta de socios deberá celebrarse dentro del plazo de 30 días, contado desde que se exija su celebración.

Artículo 29: Los consejeros, administradores, el gerente o liquidadores en su caso, serán solidariamente responsables de los perjuicios que causen a los socios y terceros en razón de la falta de fidelidad o vigencia de los documentos mencionados en el inciso precedente. Lo anterior es sin perjuicio de las sanciones administrativas que además pueda aplicar el organismo fiscalizador respectivo, a las cooperativas sometidas a su control.

Artículo 30: Las personas que incurran o se encuentren en las inhabilidades establecidas para los directores de sociedades anónimas en los artículos 35 y 36 de la Ley N° 18.046, en lo que les fueren aplicables, no podrán desempeñarse como consejeros, liquidadores, inspectores de cuentas, miembros de juntas de vigilancia ni gerentes de cooperativas.

TITULO V

Del capital y de los excedentes

Artículo 31: El capital de las cooperativas será variable e ilimitado, a partir del mínimo que fijen sus estatutos y se formará con las sumas que paguen los socios por la suscripción de sus cuotas de participación. Los estatutos fijarán el monto de aportes mínimos que deberán efectuar los socios para incorporarse o mantener su calidad de tales.

El patrimonio de estas entidades estará conformado por los aportes de capital efectuados por los socios, las reservas legales y voluntarias y los excedentes o pérdidas existentes al cierre del período contable.

La participación de los socios en el patrimonio se expresará en cuotas de participación, cuyo valor será el que resulte de la suma del valor de sus aportes de capital, más las reservas voluntarias y más o menos, según corresponda, el ajuste

monetario señalado en el inciso tercero del artículo 34 de la presente ley y los excedentes o pérdidas existentes, dividido por el total de cuotas de participación emitidas al cierre del período.

El valor de las cuotas de participación se actualizará periódicamente en las oportunidades que indique la ley o lo establezca el respectivo fiscalizador.

En las cooperativas de vivienda y en las de ahorro y crédito, el capital inicial no podrá ser inferior al patrimonio mínimo que establezca la ley para cada una de ellas.

En las cooperativas abiertas de vivienda, no podrán considerarse como capital los recursos económicos que los socios aporten a las mismas con el objeto de pagar el todo o parte del precio del inmueble que adquieran a través de la cooperativa, cuando el socio que los aporte no esté incorporado a algún programa habitacional específico. Tampoco podrán considerarse como capital los recursos que las cooperativas de ahorro y crédito reciban de sus socios por un concepto distinto al de suscripción de cuotas de participación.

Si el socio no pagare oportunamente los aportes de capital suscritos por él, los saldos insolutos serán cobrados en la forma dispuesta en el artículo 36.

El capital inicial deberá pagarse dentro del plazo que determinen los Estatutos.

Los aumentos de capital deberán pagarse en la forma o en el plazo que acuerde la Junta General de Socios.

Una vez vencido el plazo señalado por los estatutos o acordado por el órgano competente, sin que se haya enterado el capital suscrito o el aumento del capital, según corresponda, éste quedará reducido a la cantidad efectivamente pagada.

Artículo 32: La responsabilidad de los socios de las cooperativas estará limitada al monto de sus cuotas de participación.

Artículo 33: Las cuotas de participación de las cooperativas serán nominativas y su transferencia y rescate, si éste fuere procedente, deberán ser aprobados por el Consejo de Administración.

Se prohíbe la creación de cuotas de participación de organización y privilegiadas.

Artículo 34: Las cooperativas deberán practicar balance al 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio de la presentación de estados financieros periódicos en las oportunidades que determinen sus estatutos o la respectiva institución fiscalizadora, cuando corresponda. El Consejo de Administración de las cooperativas de ahorro y crédito y de las abiertas de vivienda deberá, además, presentar una memoria razonada acerca de la situación de la cooperativa en el período.

Las cooperativas deberán corregir monetariamente sus activos y pasivos de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto Ley N° 824, de 1974.

No obstante, el reglamento establecerá normas especiales que permitan ajustar periódicamente el valor de los activos y pasivos a los precios de mercado. Este valor se incluirá en una cuenta transitoria del patrimonio, denominada "Ajuste Monetario", que deberá ser distribuida proporcionalmente entre las cuentas del patrimonio, el primer día hábil siguiente al cierre del período contable en que se haya producido el ajuste.

Artículo 35: La junta general de socios podrá autorizar la emisión de valores de oferta pública de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores.

Artículo 36: Para el cobro de los saldos insolutos de las cuotas de participación bastará como título ejecutivo una copia autorizada del acta del Consejo de Administración en la que conste el acuerdo tomado por dicho consejo en orden a su cobro judicial, acompañado del documento de suscripción correspondiente.

Artículo 37: Podrá aceptarse por el Consejo de la cooperativa la reducción o retiro parcial de los aportes hechos por los socios, sin que éstos pierdan la calidad de tales y de acuerdo con las normas que al efecto establezcan los estatutos.

Artículo 38: El saldo favorable del ejercicio económico, que se denominará remanente, se destinará a absorber las pérdidas acumuladas, si las hubiere. Hecho lo anterior, se destinará a la constitución e incremento de los fondos de reserva, en el caso que éstos sean obligatorios, o a la constitución e incremento de reservas voluntarias y al pago de intereses al capital, de conformidad con el estatuto. Por último, el saldo, si lo hubiere, se denominará excedente y se distribuirá en dinero entre los socios o dará lugar a una emisión liberada de cuotas de participación.

Los excedentes provenientes de operaciones de la cooperativa con los socios, se distribuirán a prorrata de éstas. Aquellos provenientes de operaciones con terceros, se distribuirán a prorrata de las cuotas de participación.

Las cooperativas abiertas de vivienda y las de ahorro y crédito deberán constituir e incrementar cada año un fondo de reserva legal, con un porcentaje no inferior al 20% de sus remanentes. Cuando el fondo de reserva legal alcance un 50% del patrimonio, estas entidades estarán obligadas a distribuir entre los socios, a título de excedentes, al menos el 30% de los remanentes. El saldo podrá incrementar el fondo de reserva legal o destinarse a reservas voluntarias.

Las demás cooperativas podrán formar reservas voluntarias, pero ellas no podrán exceder del 15% del patrimonio.

Artículo 39: Las cooperativas abiertas de vivienda y las de ahorro y crédito deberán tener invertido, a lo menos, el 10% de su patrimonio en activos e instrumentos de fácil liquidación que determine el Reglamento.

Este porcentaje podrá ser aumentado mediante norma de aplicación general por el organismo fiscalizador.

Artículo 40: En caso de liquidación de la cooperativa, una vez absorbidas las eventuales pérdidas, pagadas las deudas y reembolsado a cada socio el valor actualizado de sus cuotas de participación, las reservas legales y cualesquiera otros excedentes resultantes, se distribuirán entre los socios, a prorrata de sus cuotas de participación.

La porción del patrimonio que se haya originado en donaciones recibidas por la cooperativa, salvo en el caso señalado en el artículo 81, deberá destinarse al objeto que señalen los estatutos. A falta de mención expresa, corresponderá a la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción destinarlos a favor de una o más de las instituciones regidas por la presente ley.

Artículo 41: La junta general de socios deberá aprobar previamente toda adquisición, a título oneroso, de cuotas de capital, acciones o derechos sociales de cualesquiera cooperativa o sociedad, en virtud de la cual llegue a tener invertido en una de éstas a lo menos el 10% de su patrimonio.

Artículo 42: Las operaciones entre las cooperativas y las personas jurídicas señaladas en el artículo precedente deberán observar condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado. Los administradores de unas y otras serán responsables de las pérdidas o perjuicios que pudieren causar a la entidad que administren por operaciones hechas con infracción a este artículo.

Lo dispuesto en el inciso precedente será también aplicable a las operaciones que realicen entre sí, las sociedades cuyo capital social pertenezca en, al menos, un 25% a la misma cooperativa.

TITULO VI

De la disolución, fusión, división, transformación y liquidación de las cooperativas

Artículo 43: Las cooperativas se disuelven:

- a) Por el vencimiento del plazo de duración, si lo hubiere.
- b) Por acuerdo de la junta general.
- c) Por las demás causales contempladas en los estatutos.

Se disolverán, asimismo, por sentencia judicial ejecutoriada dictada conforme al procedimiento establecido en el Capítulo V de la presente ley a solicitud de los socios, del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía o del organismo fiscalizador respectivo, basada en alguna de las siguientes causales:

- 1) Incumplimiento reiterado de las normas que fijen o de las instrucciones que impartan el Departamento de Cooperativas o el organismo fiscalizador respectivo;
- 2) Contravención grave o inobservancia de la ley o de los estatutos sociales, y
- 3) Las demás que contemple la ley.

Artículo 44: Cuando la disolución se produzca por alguna de las causales contempladas en las letras a) y c) del artículo precedente, el consejo de administración, dentro de los 30 días siguientes, consignará este hecho por escritura pública, cuyo extracto deberá inscribirse en el Registro de Comercio y publicarse en el Diario Oficial.

Una vez que hayan transcurrido 60 días, a contar del vencimiento del término de duración de la entidad, sin que se haya dado cumplimiento a las formalidades establecidas en el inciso precedente, el gerente, cualquier miembro, titular o suplente, del consejo de administración, socio o tercero interesado podrá dar cumplimiento a ellas.

Sin perjuicio de lo anterior, sea cual fuere la causal de disolución de una cooperativa, ésta deberá ser notificada a los socios mediante carta certificada dirigida al domicilio que tuvieren registrado.

Artículo 45: Dos o más cooperativas podrán fusionarse.

La fusión consiste en la reunión de dos o más cooperativas en una sola que las sucede en todos sus derechos y obligaciones, y a la cual se incorporan la totalidad del patrimonio y socios de los entes fusionados.

Hay fusión por creación, cuando el activo y pasivo de dos o más cooperativas que se disuelven, se aportan a una nueva cooperativa que se constituye.

Hay fusión por incorporación, cuando una o más cooperativas que se disuelven son absorbidas por una cooperativa ya existente, la que adquiere todos sus activos y pasivos.

En estos casos, no procederá la liquidación de las cooperativas fusionadas o absorbidas.

En las juntas generales en que se acuerde la fusión deberán aprobarse los balances auditados de las cooperativas que se fusionan.

Ningún socio, a menos que consienta en ello, podrá perder su calidad de tal, con motivo de una fusión por creación o incorporación.

Aprobados en junta general los balances auditados y los informes periciales que procedieren de las cooperativas objeto de la fusión y los estatutos de la que se crea o de la absorbente, en su caso, el consejo de administración de ésta deberá distribuir directamente las nuevas cuotas de participación entre los socios de aquellas, en la proporción correspondiente.

Los excedentes generados por cada cooperativa en el ejercicio en que se realice la fusión pertenecerán a los socios de la cooperativa en que se produjeron y se distribuirán en conformidad a los estatutos de la respectiva cooperativa.

Artículo 46: La división de las cooperativas y su transformación en otro tipo de sociedad, deberá ser acordada en junta general de socios citada especialmente con dicho objeto.

La división consiste en la distribución del patrimonio de la cooperativa entre sí y una o más cooperativas que se constituyan al efecto, correspondiéndoles a los socios de la cooperativa dividida, la misma proporción en el capital de cada una de las nuevas cooperativas que aquellas que poseían en la cooperativa que se divide.

La transformación consiste en la modificación de los estatutos de una cooperativa, mediante la cual se la somete a un régimen jurídico aplicable a otro tipo de sociedad, subsistiendo su personalidad jurídica.

Antes de la adopción del acuerdo de división o de transformación, deberá someterse a consideración de la junta general de socios el balance de la entidad y los estados y demostraciones financieras que el reglamento determine, auditados por profesionales independientes designados por la junta general de socios.

Ningún socio, a menos que consienta en ello, podrá perder su calidad de tal, con motivo de una división o transformación de la cooperativa a la cual pertenece.

Artículo 47: La liquidación de una cooperativa disuelta será realizada por una comisión de tres personas elegidas por la junta general de socios.

La liquidación se practicará conforme a las normas que acuerde la junta general de socios y a las normas que sobre la materia imparta el Reglamento y el organismo fiscalizador respectivo, aplicándose lo dispuesto en el artículo 413 del Código de Comercio.

Artículo 48: La cooperativa disuelta subsiste como persona jurídica para los efectos de su liquidación, quedando vigentes sus estatutos en lo que fuere pertinente. En este caso, deberá agregar a su razón social las palabras "en liquidación".

TITULO VII

De los Privilegios y Exenciones

Artículo 49: Sin perjuicio de las exenciones especiales que contempla la presente ley, las cooperativas estarán exentas de los siguientes gravámenes.

a) Del cincuenta por ciento de todas las contribuciones, impuesto, tasas y demás gravámenes impositivos favor del Fisco. Sin embargo, las cooperativas estarán afectas al Impuesto al Valor Agregado, de conformidad a lo establecido en el decreto Ley 825 de 1974.

b) De la totalidad de los impuestos contemplados en el decreto N° 3.475, de 1980, que gravan a los actos jurídicos, convenciones y demás actuaciones que señala, en todos los actos relativos a su constitución, registro, funcionamiento interno y actuaciones judiciales, y

c) Del cincuenta por ciento de todas las contribuciones, derechos, impuestos y patentes municipales, salvo los que se refieren a la elaboración o expendio de bebidas alcohólicas y tabaco.

Las cooperativas de consumo y las de servicio deberán pagar todos los impuestos establecidos por las leyes respecto de las operaciones que efectúen con personas que no sean socios, debiendo consignar en sus declaraciones de impuestos las informaciones necesarias para aplicar esta disposición.

No obstante lo dispuesto en los incisos precedentes, las cooperativas e institutos auxiliares de cooperativas se regirán en materia de Impuesto a la Renta por las normas contenidas en el artículo 17 del Decreto Ley N° 824 de 1974.

Artículo 50: Los socios de las cooperativas no pagarán el impuesto de primera categoría de la Ley de Impuesto a la Renta por el mayor valor de sus cuotas de participación.

Artículo 51: El aumento del valor nominal de las cuotas de capital y cuotas de ahorro y la devolución de excedentes originados en operaciones con los socios estarán exentos de todo impuesto.

Artículo 52: Los socios cuyas operaciones con la cooperativa formen parte de su giro habitual, deberán contabilizar en el ejercicio respectivo, para los efectos tributarios, los excedentes que ella les haya reconocido.

Artículo 53: Para todos los efectos legales se estimará que las instituciones regidas por la presente ley no obtienen utilidades, salvo para los efectos de lo dispuesto en los artículos 46 al 52 del Código del Trabajo.

Artículo 54: Increméntase hasta el 25% el límite de descuentos voluntarios por planilla establecido en el inciso segundo del artículo 58 del Código del Trabajo, cuando los descuentos adicionales sean a favor de cooperativas de consumo o de ahorro y crédito de las que el trabajador sea socio, siempre que la suma de los descuentos del referido inciso segundo, y de los descuentos para vivienda autorizados por el inciso primero del mismo artículo 58 del Código mencionado, no exceda del 45% de la remuneración total del trabajador.

Artículo 55: Los descuentos a favor de cooperativas señalados en el artículo precedente se deberán efectuar con el solo mérito de la autorización por escrito del socio de la cooperativa, la que deberá ser otorgada para cada operación, siempre que no se excedan los límites máximos allí fijados.

La persona natural o jurídica que haya efectuado los descuentos deberá entregárselos a la cooperativa respectiva, dentro de los primeros 10 días del mes siguiente a la fecha en que hayan debido pagarse las remuneraciones.

TITULO VIII

De las Sanciones

Artículo 56: Sólo las entidades que se hubieren constituido en conformidad a las disposiciones de la presente ley podrán usar en su denominación la palabra cooperativa u otra semejante.

Artículo 57: El Departamento de Cooperativas o cualquier persona podrá solicitar al Juzgado de Policía Local correspondiente al domicilio del infractor, que ordene la clausura de los a) y b) establecimientos, oficinas, locales o dependencias de la entidad que haga uso indebido de la denominación señalada.

Artículo 58: Los consejeros, gerentes, liquidadores, inspectores de cuentas, integrantes de la junta de vigilancia, de la comisión liquidadora y del comité organizador y los socios de las cooperativas con los cuales el gerente deba ejercer sus atribuciones en mérito de lo establecido en el artículo 61, que incurran en infracciones a las leyes, al reglamento, a los estatutos y a las demás normas que rigen a las cooperativas, o en incumplimiento de las instrucciones que les imparta el Departamento de Cooperativas, podrán ser objeto de la aplicación por éste de una multa a beneficio fiscal, la que deberá ser cumplida solidariamente por los infractores, hasta por un monto global por cooperativa equivalente a 25 unidades

tributarias mensuales. Si se tratare de infracciones reiteradas de la misma naturaleza, la multa podrá alcanzar hasta un monto equivalente a 50 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las establecidas en otras leyes y de su disolución por aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 43 de esta ley, en su caso.

Artículo 59: Las resoluciones del Departamento de Cooperativas que apliquen multas tendrán mérito ejecutivo una vez vencido el plazo para impugnarlas o desde que quede a firme la sentencia que rechace el recurso de reclamación. El cobro de las multas corresponderá a la Tesorería General de la República.

CAPITULO II

DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LAS DIVERSAS CLASES DE COOPERATIVAS

TITULO I

De las Cooperativas de Trabajo

Artículo 60: Son cooperativas de trabajo las que tienen por objeto producir o transformar bienes o prestar servicios a terceros, mediante el trabajo mancomunado de sus socios y cuya retribución debe fijarse de acuerdo a la labor realizada por cada cual.

Los aportes de los socios personas naturales deberán consistir necesariamente en el trabajo que se obliguen a realizar, sin perjuicio de los aportes que hagan en dinero, bienes muebles o inmuebles.

Las cooperativas de trabajo deberán tener un mínimo de cinco socios.

Artículo 61: No será obligatorio que las Cooperativas de Trabajo que tengan diez socios o menos, designen un Consejo de Administración. En caso que omitan su designación, al gerente, que será designado por la Junta General de Socios, le corresponderán las atribuciones que esta ley y su reglamento confieren al Consejo

de Administración. Sin embargo, la Junta General podrá disponer que el gerente deberá desempeñar todo o parte de las atribuciones correspondientes al Consejo de Administración, en conjunto con uno o mas socios que deberá determinar.

Las cooperativas señaladas en el inciso anterior tampoco estarán obligadas a designar una Junta de Vigilancia, en cuyo caso deberán designar un inspector de cuentas titular y un suplente, que tendrán las atribuciones que esta ley y su reglamento confieren a la Junta de Vigilancia.

Artículo 62: Los socios trabajadores no tendrán derecho a percibir remuneración, sin perjuicio de que podrán percibir una suma equivalente a un ingreso mínimo mensual si trabajan durante la jornada ordinaria de trabajo o a la proporción correspondiente en caso contrario. Dichas sumas serán consideradas gastos del ejercicio en que hayan sido devengadas y los socios no estarán obligados a devolverlas en caso alguno.

El excedente se distribuirá entre los socios en proporción al trabajo realizado por cada uno de ellos, según las normas generales que fije el respectivo estatuto.

Los socios podrán hacer retiros anticipados durante el ejercicio con cargo a los excedentes del mismo. El monto máximo de dichos retiros será determinado por el consejo de administración. Estos retiros no podrán ser superiores a la suma de los excedentes devengados en el curso del ejercicio, más los saldos no distribuidos en los ejercicios anteriores.

Las sumas retiradas en exceso deberán ser cubiertas por los socios, sin perjuicio de la responsabilidad de los miembros del consejo que hubieren adoptado el acuerdo respectivo y del gerente que no haya manifestado su opinión en contrario.

El Departamento de Cooperativas tendrá la facultad de dictar normas que regulen el tratamiento de los anticipos retirados en exceso, en el evento que éstos no sean reintegrados en el ejercicio siguiente a aquél en que se pagaron.

Artículo 63: El ingreso, retiro o exclusión de los socios, las prestaciones mutuas a que haya lugar y, en general, las relaciones entre los socios y las cooperativas de trabajo, no se regirán por las normas del Código del Trabajo sino por las contenidas en esta ley, el estatuto, el reglamento interno de la cooperativa y el reglamento de la presente ley.

Sin embargo, serán aplicables a los socios personas naturales y a las cooperativas, según corresponda, los artículos 14, 15, 17 y 158, y los Títulos I, II y III del Libro II del Código del Trabajo.

Los estatutos deberán regular la forma de determinar la naturaleza de los servicios que deberán prestar los socios personas naturales, el lugar o ciudad en que hayan de prestarse, la duración y distribución de la jornada de trabajo, el trabajo en horas extraordinarias, el descanso dentro de la jornada, el descanso semanal, el feriado anual y las prestaciones a que tenga derecho el socio que se retire o sea excluido. Los conflictos que se susciten en relación con las materias tratadas en este artículo y las prestaciones a que dieren lugar, serán de conocimiento de los juzgados de letras del trabajo del domicilio de la cooperativa, conforme al procedimiento establecido en el Capítulo II del Título I del Libro V del Código del Trabajo.

Artículo 64: Los socios de las cooperativas de trabajo deberán tributar por su participación en el excedente con el impuesto que corresponde a los contribuyentes señalados en el artículo 42º, de la Ley de Impuesto a la Renta, siempre que lo hayan percibido efectivamente.

Sólo para los efectos previsionales, las cooperativas de trabajo serán consideradas empleadoras y los socios que trabajen en ellas trabajadores dependientes de las mismas, quienes accederán a todos los beneficios que la legislación establece para estos, tales como el subsidio por cargas familiares y el seguro por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

En tal carácter, la cooperativa hará la retención de las sumas que corresponda descontar por imposiciones previsionales respectiva, conjuntamente con aquellos aportes previsionales que corresponden a su condición de empleadora.

Sólo las sumas percibidas efectivamente por los socios con cargo al excedente, en conformidad al reglamento interno, serán consideradas remuneraciones para estos efectos. Los excedentes que sean capitalizados por los socios no estarán afectos a los descuentos previsionales.

TITULO II

De las Cooperativas Agrícolas, Campesinas y Pesqueras

Artículo 65: Son cooperativas agrícolas y campesinas las que se dedican a la compraventa, distribución, producción y transformación de bienes, productos y servicios, relacionados con la actividad silvoagropecuaria y agroindustrial, con el objeto de procurar un mayor rendimiento de ella y que actúan preferentemente en un medio rural y propenden al desarrollo social, económico y cultural de sus socios.

Artículo 66: Sólo podrán pertenecer a las cooperativas campesinas los pequeños productores agrícolas y los campesinos definidos en el artículo 13 de la ley Nº 18.910. Podrán además ser socios de estas cooperativas las personas de derecho público y de derecho privado que no persigan fines de lucro y las personas naturales o jurídicas que sean propietarias, usufructuarias, arrendatarias o tenedoras a cualquier título de los predios en que dichas cooperativas desarrollen sus actividades.

Artículo 67: Son cooperativas pesqueras aquellas que se dedican a la producción, compra, venta, distribución, transformación de bienes, productos y servicios relacionados con la explotación de productos del mar y a las actividades que persigan el mejoramiento de las condiciones de vida de quienes las desempeñan.

Las cooperativas pesqueras formadas por pescadores artesanales, tendrán acceso a todos los beneficios que señala la Ley General de Pesca y Acuicultura, para las organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas.

TITULO III

De las Cooperativas de Servicios

Artículo 68: Son cooperativas de servicio las que tengan por objeto distribuir los bienes y proporcionar servicios de toda índole, preferentemente a sus socios, con el propósito de mejorar sus condiciones ambientales y económicas y de satisfacer sus necesidades familiares, sociales, ocupacionales o culturales.

Sin que la enumeración siguiente sea taxativa, las cooperativas de esta clase podrán tener el carácter de escolares, de abastecimiento y distribución de energía eléctrica y de agua potable, de vivienda, de aprovisionamiento, de ahorro y crédito y también de beneficio para las actividades del hogar y de la comunidad.

De las Cooperativas Escolares

Artículo 69: Son cooperativas escolares las que se constituyen en los establecimientos de educación básica, media, especial o superior, con el objeto de propender al mejoramiento de las escuelas en las cuales se fundan y de la comunidad en que éstas funcionan. El propósito principal de las cooperativas escolares es educativo y secundariamente económico.

Artículo 70: Las finalidades de estas cooperativas deberán ser las de proporcionar útiles escolares o servicios que propendan al desarrollo cultural, social y físico de la comunidad educativa. Los estatutos señalarán específicamente estos fines y los medios a través de los cuales serán llevados a la práctica, todo conforme a las normas que fije el reglamento. Las cooperativas escolares estarán exentas de todos los impuestos fiscales y municipales, salvo del impuesto al valor agregado contemplado en el Decreto Ley N° 825, de 1974.

Artículo 71: Las cooperativas escolares no distribuirán sus beneficios económicos, los cuales se dedicarán a la constitución de un fondo de reserva y un fondo de desarrollo.

De las Cooperativas de Abastecimiento y Distribución de Energía Eléctrica y de Agua Potable

Artículo 72: Son cooperativas de abastecimiento y distribución de energía eléctrica las cooperativas de servicio que se constituyan con el objeto de distribuir energía eléctrica. En cuanto a las operaciones del giro, se aplicará a estas cooperativas las normas del Decreto con fuerza de ley del Ministerio de Minería, de 1982, sin perjuicio de las disposiciones siguientes.

Las cooperativas no concesionaria de servicio público de distribución podrán distribuir energía eléctrica a sus socios incluso en zonas concesionadas a otras empresas, siempre y cuando dichos socios hayan ingresado a la cooperativa con anterioridad al otorgamiento de la concesión.

Las referidas cooperativas podrán usar bienes nacionales de uso público para el tendido de líneas aéreas y subterráneas destinadas a la distribución de electricidad, previa obtención de los permisos correspondientes.

Las cooperativas concesionarias de servicio público de distribución podrán exigir a sus socios y a los usuarios que soliciten servicio, un aporte de financiamiento reembolsable para la extensión de las instalaciones existentes hasta el punto de empalme del peticionario, para la extensión de líneas subterráneas o para ampliación de potencia.

Los aportes financieros se reembolsarán por su valor inicial reajustado e intereses pactados, de conformidad con lo dispuesto a este respecto en el decreto con fuerza de ley del Ministerio de Minería.

No obstante, si el reembolso fuese efectuado en cuotas de participación de la propia cooperativa, ésta deberá liquidarlas y pagarlo en dinero dentro del plazo máximo de 5 años, contado desde la solicitud del socio en tal sentido, al valor que dichas cuotas tuviesen al momento de la referida solicitud.

La elección de la forma de reembolso se efectuará de conformidad con las normas del decreto con fuerza de ley pero el aportante podrá oponerse a ella de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 114 de la presente ley, cuando estime que la forma de reembolso propuesta no constituya un reembolso real.

Las referidas cooperativas no podrán cobrar gastos por concepto de reembolso de los aportes.

Artículo 73: Las cooperativas de abastecimiento y distribución de agua potable se regirán, en lo que fuere aplicable, por las disposiciones de las leyes especiales que regulan esta actividad.

De las Cooperativas de Vivienda Disposiciones Generales

Artículo 74: Son cooperativas de vivienda aquellas que tienen por objeto satisfacer las necesidades habitacionales y comunitarias de sus socios y prestar los servicios inherentes a dicho objetivo.

Habrán dos clases de cooperativas de vivienda:

- 1) Las cooperativas cerradas de vivienda, que se organizan para desarrollar un proyecto habitacional, y
- 2) Las cooperativas abiertas de vivienda, que deben ser de objeto único y pueden desarrollar en forma permanente, simultánea o sucesiva diferentes programas habitacionales y tener carácter nacional o bien desarrollar una acción regional.

Artículo 75: Los dueños de terrenos ubicados en una misma comuna, que persigan como objetivo la construcción, ampliación o terminación de sus viviendas, la finalización de la urbanización o el establecimiento de servicios comunitarios, podrán constituir cooperativas de servicios habitacionales, conservando la propiedad de sus terrenos. Estas entidades se registrarán por las normas aplicables a las cooperativas cerradas de vivienda.

Artículo 76: La enajenación de las cuotas de participación de las cooperativas de vivienda deberá ser previamente aprobada por el consejo de administración, debiendo efectuarse mediante instrumento privado autorizado ante notario, en el que deberá constar la fecha de la sesión del consejo que la haya aprobado.

El consejo de administración podrá rechazar la enajenación en los casos previstos en los estatutos.

No será aplicable el artículo 1796 del Código Civil a la compraventa de cuotas de participación entre cónyuges. Sin embargo, la enajenación será inoponible a los acreedores del cedente que tuvieren créditos anteriores a la cesión.

Artículo 77: El consejo de administración de las cooperativas de vivienda, a petición de cualquier socio interesado, le adjudicará en dominio la vivienda construida que tenga asignada en uso y goce o que le corresponda, una vez que se haya cumplido con las exigencias de urbanización y que el socio haya caucionado sus obligaciones pendientes con la cooperativa, si las hubiere.

Sin embargo, las cooperativas podrán conservar la propiedad de sus viviendas cuando el acreedor hipotecario que otorgó los créditos para construirlas así lo exija, de lo que se dejará constancia expresa en la escritura de mutuo respectiva. La prohibición de adjudicar las viviendas deberá ser inscrita en el Registro de Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces respectivo. Una vez pagado el mutuo hipotecario los socios tendrán el derecho establecido en el inciso primero.

Artículo 78: Los pasivos exigibles de las cooperativas de vivienda con más de 1.000 socios y cuyo patrimonio sumado a los ahorros de los socios exceda las 100.000 unidades de fomento, no podrán ser superiores a tres veces la suma de estos más el valor de los subsidios habitacionales obtenidos por o para sus socios.

Artículo 79: Una vez que se asigne en uso y goce las viviendas a los socios, si su edificación o la ejecución de las obras de urbanización, hubiere sido financiada con un mutuo hipotecario, deberá dividirse el préstamo y la garantía hipotecaria entre los diversos inmuebles asignado a cada socio, el que responderá por la cuota correspondiente a dicho inmueble. Para estos efectos, el consejo de administración de la cooperativa representará legalmente a sus socios.

Los socios pagarán directamente al acreedor hipotecario sus dividendos a menos que se haya pactado otra cosa.

En caso de atraso en el pago del dividendo y siempre que dicho atraso exceda de 60 días, podrá el acreedor perseguir judicialmente la responsabilidad del socio. La garantía hipotecaria sólo podrá hacerse efectiva sobre el inmueble asignado al socio respectivo, aun cuando no se haya otorgado la recepción definitiva de la urbanización.

Artículo 80: Los socios a quienes se haya asignado una vivienda, tendrán derecho al uso y goce personal de la misma o a su arriendo en casos calificados, de acuerdo con las condiciones que establezcan los estatutos y el reglamento.

Los asignatarios o sus herederos, con sus obligaciones pecuniarias al día respecto de las cooperativas, que estén en uso y goce de una vivienda y que dejen de tener la calidad de socios, no perderán sus derechos sobre la misma.

De las Cooperativas Cerradas de Vivienda

Artículo 81: Los terrenos adquiridos por las cooperativas de vivienda a título gratuito, se considerarán parte de su capital para los efectos de la adjudicación de viviendas a los socios.

Artículo 82: Para la adquisición a título oneroso de terrenos por una cooperativa de vivienda se deberá contar con un informe técnico favorable relativo a la factibilidad del loteo y la urbanización, de la dirección de obras o la unidad que ejerza sus funciones, de la municipalidad correspondiente a la ubicación del inmueble.

El informe deberá ser emitido dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha de presentación de la solicitud con los certificados que sean necesarios.

El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo podrá autorizar a los institutos a que se refiere el artículo 104, que emitan el informe técnico antes mencionado, siempre que se ciñan a las normas que el citado Ministerio les imparta.

El acto o contrato que se celebre sin el informe técnico favorable a que se refiere este artículo adolecerá de nulidad relativa.

Los notarios no autorizarán escrituras ni los conservadores procederán a inscribirlas si no se inserta en ellas el correspondiente informe.

Artículo 83: Las cooperativas cerradas de vivienda no se disuelven ni liquidan por el hecho de haber asignado en dominio a sus socios la totalidad de las viviendas por ellas construidas, si su objeto contempla el equipamiento y desarrollo comunitario.

De las Cooperativas Abiertas Vivienda

Artículo 84: El patrimonio de las cooperativas abiertas de vivienda no podrá ser inferior al equivalente a 7.000 unidades de fomento y tendrán un número de, a lo menos, 300 socios.

Estas cooperativas sólo podrán financiar sus gastos de administración con comisiones contempladas en los estatutos y en el reglamento. Además, podrán financiar otros gastos ordinarios y extraordinarios con los recursos económicos y comisiones adicionales que los socios aporten en la forma que contemple el reglamento. Los excedentes provenientes de las comisiones incrementarán el patrimonio de la cooperativa, integrándose al fondo de reserva legal si éste no se hubiere completado.

Los socios deberán ser informados oportuna y detalladamente sobre el destino de sus comisiones y aportes extraordinarios.

El organismo fiscalizador respectivo deberá dictar las normas administrativas y contables necesarias para aplicar las disposiciones precedentes. Asimismo, establecerá el procedimiento de entrega de información a los socios respecto del funcionamiento de las asambleas de programas, los procedimientos para acordar el loteo y la construcción y financiamiento para la adquisición de las viviendas y respecto de los aportes, exenciones tributarias que benefician a los socios o a la cooperativa y otras materias que se consideren necesarias, en conformidad al reglamento.

En todo caso, deberán contabilizar separadamente las operaciones, actos y transacciones de cada uno de los programas habitacionales, con el objeto de determinar, respecto de cada uno de ellos, sus respectivos derechos, obligaciones y resultados, sin perjuicio de los estados consolidados y demostraciones financieras necesarios para el uso interno y el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y requerimientos de los organismos fiscalizadores. Los costos directos y todos aquellos asociados específicamente a cada programa habitacional deberán ser financiados por los socios incorporados a los mismos.

En caso de que una cooperativa abierta de vivienda perdiere sus fondos de reserva, por cualquier causa, deberá abstenerse de aceptar el ingreso de nuevos socios, salvo cuando éstos se incorporen directamente a algún programa habitacional en desarrollo o el organismo fiscalizador las autorice.

Éste sólo podrá autorizarlas cuando les apruebe un plan de actividades que asegure la estabilidad financiera de la entidad dentro de un plazo determinado.

Artículo 85: Las cooperativas abiertas de vivienda deberán formar una asamblea por cada programa habitacional, al cual pertenecerán los socios personas naturales incorporados al mismo, debiendo asimismo constituirse una asamblea con todos los socios ahorrantes personas naturales que no estén inscritos en ningún programa. En el caso que los socios ahorrantes tengan su residencia en distintas regiones del país, podrá formarse más de una asamblea de éstos, según lo establezcan los estatutos, el reglamento o lo determine la junta general.

Cada programa habitacional deberá tener un número limitado de socios y durará hasta que se efectúe una liquidación completa del mismo, una vez transferido el dominio de las viviendas a los socios. No obstante, los socios podrán continuar con el programa

habitacional y la asamblea respectiva después de la liquidación, cuando así lo hayan decidido al incorporarse al mismo.

Cada vez que se cite a una junta general de socios, deberá convocarse, con a lo menos 30 días de anticipación, a las asambleas a que se refiere el inciso primero para tratar las materias que serán consideradas en la junta y proceder a las elecciones que correspondan.

Cada asamblea deberá elegir un consejo, cuya composición y atribuciones se fijarán en los estatutos. La junta general de socios de estas cooperativas, se constituirá con los consejeros de cada asamblea, quienes actuarán en calidad de delegados y representarán a sus respectivas asambleas, de acuerdo al número de socios inscritos en ella.

Las cooperativas abiertas de vivienda de carácter nacional podrán contemplar en sus estatutos asambleas regionales, a las cuales deberán asistir los consejeros de programa. Sin perjuicio de las atribuciones que les confieran los estatutos y el reglamento, les corresponderá elegir un consejo regional, cuyos miembros en ejercicio representarán a los socios inscritos en las asambleas de la región respectiva, de acuerdo a lo señalado precedentemente.

En todo caso, la adopción de acuerdos relativos a las materias señaladas en las letras d), e), f), g), h) e i) del artículo 23 deberá efectuarse en junta general de socios, convocada y constituida de acuerdo a las normas generales, en la cual no regirá respecto de los consejeros de asambleas de programas o regionales la limitación establecida en el inciso quinto del artículo 22 relativa al voto por poder.

La enajenación de los bienes raíces destinados, de acuerdo al plano respectivo, a ser usados en común por una Asamblea de Programa, como las áreas de esparcimiento, recreación, reunión o desarrollo cultural de los integrantes del programa habitacional de que se trate, así como la constitución de derechos reales distintos al de dominio, sólo podrá ser efectuada por el Consejo de Administración, con acuerdo de la respectiva Asamblea.

Las cooperativas abiertas de vivienda que tengan un máximo de 300 socios y las que tengan un solo programa habitacional, podrán celebrar sus juntas generales con la asistencia de sus socios, conforme a las normas generales.

De las Cooperativas de Ahorro y Crédito

Artículo 86: Se denominarán cooperativas de ahorro y crédito las cooperativas de servicio que tengan por objeto único y exclusivo brindar servicios de intermediación financiera en beneficio de sus socios, de conformidad con las siguientes disposiciones:

Las cooperativas de ahorro y crédito podrán realizar las siguientes operaciones:

- a) Recibir depósitos de sus socios y de terceros;
- b) Emitir bonos y otros valores de oferta pública;
- c) Contraer préstamos con instituciones financieras nacionales o extranjeras;
- d) Adquirir, conservar y enajenar bonos de la deuda interna y cualquiera otra clase de documentos emitidos en serie representativos de obligaciones del Estado o de sus instituciones;
- e) Conceder préstamos a sus socios y en general, celebrar con ellos operaciones de crédito de dinero, con o sin garantía, reajustables y no reajustables;
- f) Descontar a sus socios, letras de cambio, pagarés y otros documentos que representen obligaciones de pago;
- g) Otorgar préstamos a sus socios, que se encuentren amparados por garantía hipotecaria, y mutuos hipotecarios endosables. El otorgamiento, cesión y administración de estos últimos se regirá por lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley General de Bancos, contenida en el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, siendo aplicables a los mismos, en lo pertinente, las disposiciones de las leyes N° 19.439 y N° 19.514. Al efecto, las cooperativas de ahorro y crédito, y las demás entidades indicadas en el inciso final del N° 7 del artículo 69 citado, podrán administrar y ser cesionarias, en su caso, de los mutuos hipotecarios endosables otorgados de conformidad a esta letra.

Asimismo, adquirir, conservar y enajenar mutuos hipotecarios endosables otorgados por empresas bancarias de acuerdo al artículo 69 de la Ley General de Bancos y por otras entidades reguladas por leyes especiales que les permitan dicha clase de operaciones, con sujeción a las condiciones, requisitos y modalidades que se establezcan conforme a la letra q) de este artículo.

En todo caso, las cooperativas de ahorro y crédito que actúen como cedentes de mutuos hipotecarios endosables de acuerdo a lo indicado precedentemente, sólo responderán de la existencia del crédito cedido, quedándoles expresamente vedado otorgar garantía alguna de solvencia respecto del mismo;

- h) Emitir letras, órdenes de pago y giros contra sus propias oficinas o corresponsales;
- i) Previa autorización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, conceder a sus socios, préstamos en moneda nacional, mediante la emisión de letras de

crédito, de conformidad con lo dispuesto en el Título XIII del decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, que contiene el texto refundido y sistematizado de la Ley General de Bancos;

j) Adquirir, ceder y transferir efectos de comercio;

k) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos;

l) Adquirir, conservar, edificar y enajenar los bienes raíces necesarios para su funcionamiento. Podrán dar en arrendamiento la parte de los inmuebles que no se encuentren utilizando;

m) Adquirir, conservar y enajenar los bienes corporales muebles necesarios para su servicio o para la mantención de sus inversiones;

n) Emitir y operar tarjetas de crédito, para sus socios;

o) Previa autorización del organismo fiscalizador respectivo y cumpliendo los requisitos generales que para el objeto específico ella establezca, podrán ser accionistas o tener participación en una sociedad o cooperativa de apoyo al giro, de conformidad al Párrafo 2, del Título IX del decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, que contiene el texto refundido y sistematizado de la Ley General de Bancos;

p) Otorgar a sus clientes servicios financieros por cuenta de terceros, en la forma y condiciones que determine el órgano fiscalizador respectivo, y

q) Otras operaciones que autorice el Banco Central de Chile, conforme a sus facultades. Las operaciones antes señaladas sólo podrán ser ejecutadas bajo las condiciones, requisitos y modalidades que establezca el Banco Central de Chile, de conformidad a sus facultades.

Para la realización de las operaciones establecidas en las letras b), g) en lo referente a LEY 20190 mutuos hipotecarios endosables, Art. 16 N° 2 h), i), k) y n), las cooperativas de ahorro y crédito deberán contar con un patrimonio pagado igual o superior a 400.000 unidades de fomento y encontrarse sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Artículo 87: Las cooperativas de ahorro y crédito cuyo patrimonio exceda las 400.000 unidades de fomento, quedarán sometidas a la fiscalización y control de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, respecto de las operaciones económicas que realicen en cumplimiento de su objeto.

Tales cooperativas deberán contar con las instalaciones, recursos humanos, tecnológicos, procedimientos y controles necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones y operaciones; su patrimonio no podrá ser inferior al 10% de sus activos ponderados por riesgo, ni inferior al 5% de sus activos totales y, en lo que sea compatible con su naturaleza, quedarán sujetas a las disposiciones de la Ley General de Bancos, cuyo texto refundido y sistematizado está contenido en el Decreto con Fuerza de Ley N°3, de 1997. En especial se les aplicarán las normas de los Títulos I y XV, con exclusión de sus artículos 123, inciso quinto, y 132, inciso segundo, y sus administradores deberán cumplir los requisitos de integridad contemplados en la letra b) del artículo 28 de la referida Ley.

El resto de las cooperativas de ahorro y crédito deberá someterse a las normas sobre contabilidad, auditoría, publicidad y control que determine el Departamento de Cooperativas, en conformidad a sus facultades.

Artículo 88: Las cooperativas de ahorro y crédito deberán constituirse con un mínimo inicial de cincuenta socios.

Artículo 89: Su patrimonio no podrá ser inferior a 1.000 unidades de fomento.

Artículo 90: Las cooperativas de ahorro y crédito, además de los órganos de administración que indica el artículo 20, deberán contar con un comité de crédito, cuyos miembros serán designados por el consejo de administración.

Estas cooperativas estarán obligadas a fijar su política general de créditos en un reglamento interno, que deberá estar aprobado por el consejo de administración, sin perjuicio de las normas e instrucciones que les imparta el organismo fiscalizador respectivo.

TÍTULO IV

De las Cooperativas de Consumo

Artículo 91: Son cooperativas de consumo las que tienen por objeto suministrar a los socios y sus familias artículos y mercaderías de uso personal o doméstico, con el objeto de mejorar sus condiciones económicas.

Las cooperativas de consumo deben constituirse con 100 socios, a lo menos.

Artículo 92: Prohíbese a las cooperativas de consumo operar mediante el giro o emisión de órdenes de compra en favor de sus socios y en interés del comercio privado.

Artículo 93: Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 91 se entiende por familia, el grupo de personas que viven con el socio y a sus expensas.

TITULO V

De las Cooperativas Especiales Agrícolas y de abastecimiento de energía eléctrica

Artículo 94: Podrán constituirse cooperativas especiales agrícolas con las finalidades señaladas en el acápite primero del artículo 65 de esta ley.

Igualmente, podrán constituirse cooperativas especiales de abastecimiento de energía eléctrica con las finalidades que, en lo pertinente, se establecen en el artículo 68 y en el N° 2 del Título III del Capítulo II de la presente ley.

Serán aplicables a las cooperativas especiales a que se refieren los incisos anteriores, las disposiciones por las que se rigen las cooperativas agrícolas y las de abastecimiento de energía eléctrica.

Las normas del presente título primarán sobre aquéllas cuando unas y otras resulten incompatibles entre sí.

Las disposiciones de este título podrán aplicarse a las federaciones y confederaciones si las incorporan a sus estatutos.

Artículo 95: El número mínimo de socios, de estas entidades para los efectos de su constitución y vigencia, será de 10.

El porcentaje máximo de capital que podrá pertenecer a un socio será del 30%.

Artículo 96: Los socios de estas entidades, durante su vigencia, no podrán rescatar el valor de sus acciones. Sin embargo, con la aprobación del Consejo de Administración, podrán transferirlas a otros socios o a terceros.

El rechazo de una transferencia sólo podrá fundarse en el incumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 13 de esta ley. De él podrá reclamarse al Jefe del Departamento de Cooperativas, el cual resolverá previa audiencia de las partes. No procederá recurso alguno en contra de sus resoluciones.

Artículo 97: Del remanente de cada ejercicio deberá destinarse:

a) Un porcentaje no inferior a 5% ni superior a 10%, a constituir o incrementar el fondo de reserva legal, que no podrá exceder del 25% del capital social, y

b) Un porcentaje no superior a 20%, a los fondos de reserva que la Junta General Ordinaria acuerde formar, los cuales no podrán significar en su conjunto más del 25% del capital social y fondos de reserva de revalorización.

El excedente, si lo hubiere, se distribuirá entre los socios a prorrata de sus operaciones con la cooperativa durante el ejercicio en que él se genere. La Junta General Ordinaria establecerá la forma de determinar la incidencia de los distintos tipos de operaciones en la formación del excedente.

El excedente que provenga de operaciones con terceros se distribuirá entre los socios a prorrata de sus acciones.

Artículo 98: La convocatoria a Junta General se hará por carta o circular enviada a los socios que tengan registrados sus respectivos domicilios en la cooperativa, con quince días de anticipación a lo menos. Además, deberá publicarse, para este efecto, un aviso de citación en un periódico correspondiente al domicilio social con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, a lo menos.

Asimismo, se fijarán carteles destacados en lugares visibles en todas las oficinas de la cooperativa con veinte días de anticipación, como mínimo, a la fecha de la Junta.

En las citaciones, deberá expresarse el lugar, día, hora y objeto de la reunión.

Artículo 99: Con 30 días de anticipación a la celebración de una Junta General, el Consejo de Administración deberá proceder al cierre de los registros para determinar los socios que, a esa fecha, tengan derecho a voto. Fijará, a continuación, el total máximo de votos que podrá emitirse, el que deberá ser múltiplo de tres y no inferior a 10 veces el número de socios con derecho a voto.

Dicho total se distribuirá entre los últimos en la forma siguiente:

I.- Un tercio se prorrataará por persona entre todos los socios.

II.- Un tercio se distribuirá entre los socios a prorrata de las operaciones efectuadas por ellos con la Cooperativa, durante el último ejercicio, determinándose las operaciones por uno o más de los siguientes factores, según lo establezcan los estatutos:

a) Su cuantía en valores constantes;

b) Los márgenes brutos que ellas hayan significado como ingresos para la cooperativa;

c) Su volumen en unidades físicas de productos entregados a la cooperativa o adquiridos a ésta.

III.- Un tercio se distribuirá entre los socios a prorrata del número de acciones que posean.

Las fracciones de votos se despreciarán si el cociente resultare con una fracción igual o inferior a media unidad.

Los socios podrán hacerse representar por apoderados, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en los estatutos o el Reglamento. Sin embargo, ningún asistente a las Juntas podrá representar a más de un 10% de los socios con derecho a voto.

El sistema de votación por medio de delegados será facultativo y estará sujeto a las formalidades que establezcan los estatutos o el Reglamento.

En las elecciones de personas, cada socio podrá dividir sus votos o acumularlos a un solo candidato.

Artículo 100: Las cooperativas de que trata el presente título estarán sometidas al régimen tributario de las sociedades anónimas y los socios al de los accionistas. Para estos efectos el remanente será considerado como utilidad del ejercicio.

CAPITULO III

DE LAS CONFEDERACIONES, FEDERACIONES E INSTITUTOS AUXILIARES

Artículo 101: Las federaciones de cooperativas estarán constituidas por tres o más cooperativas, las confederaciones por tres o más federaciones y los institutos auxiliares por siete o más personas jurídicas de derecho público, cooperativas u otras personas jurídicas de derecho privado que no persiguen fines de lucro.

A las federaciones y confederaciones podrán pertenecer también como socios otras personas jurídicas de derecho público o de derecho privado que no persigan fines de lucro.

Artículo 102: Las federaciones, confederaciones e institutos auxiliares, serán considerados como cooperativas para todos los efectos legales y reglamentarios.

Artículo 103: A las federaciones y confederaciones les corresponderá velar por los intereses y complementar y facilitar el cumplimiento de los objetivos de las cooperativas, cooperando con su labor y realizando cualesquiera actividad de producción de bienes o de prestación de servicios que se señale en sus estatutos, con dicho objeto.

Artículo 104: Son institutos auxiliares aquellos destinados a proporcionar servicios de asesoría, técnicos, educacionales, económicos, operacionales, de auditoría y administrativos preferentemente a las cooperativas, federaciones, confederaciones, grupos precooperativos y a otros institutos auxiliares, pudiendo asimismo participar en la organización de industrias y servicio de cualquiera naturaleza, en beneficio de las cooperativas y de los socios de éstas.

Los excedentes de cada ejercicio se destinarán a incrementar un fondo de reserva legal, irrepartible durante la vigencia de la institución.

Artículo 105: Las instituciones a que se refiere éste Capítulo podrán desempeñar cualesquiera servicios de auditoría y de inspección técnica, económica, operacional y administrativa, con respecto a las cooperativas, en aquellos casos en que éstas se lo soliciten o el organismo fiscalizador o los árbitros que, conociendo de los casos a que alude el artículo 114 del Capítulo V de la presente ley se los encomienden.

El organismo fiscalizador o dichos árbitros podrán encomendar a estas entidades asistir, con el objeto de informarles, a juntas generales, sesiones de consejos de administración, y en general realizar cualquier diligencia o actuación que estimen procedentes para una adecuada y pronta resolución de la controversia sometida a su conocimiento.

Para el logro de sus finalidades, estas instituciones podrán operar directamente o crear entidades en que pueden participar además personas jurídicas, que de acuerdo a sus estatutos no persigan fines de lucro.

Artículo 106: Los estatutos de federaciones, confederaciones e institutos auxiliares podrán establecer que las entidades cooperativas que sean socias de las mismas tendrán un número de votos en las juntas generales proporcional al número de sus afiliados, directos o indirectos, sin que ninguna de estas entidades pueda tener más de 3 ni menos de un voto.

Artículo 107: Será aplicable a las entidades a que se refiere este título, que tengan diez socios o menos, lo dispuesto en el artículo 61.

CAPITULO IV

DEL DEPARTAMENTO DE COOPERATIVAS

Artículo 108: El Departamento de Ley Cooperativas tendrá a su cargo fomentar el sector cooperativo, mediante la promoción de programas destinados al desarrollo de la gestión y capacidad empresarial en las cooperativas; dictar normas que contribuyan al perfeccionamiento del funcionamiento de las cooperativas; llevar un registro de las cooperativas vigentes y la supervisión y fiscalización de las cooperativas señaladas en el presente Capítulo.

Le corresponderá asimismo elaborar estadísticas del sector y difundir la información de que disponga, relativa al funcionamiento de las cooperativas, mediante los mecanismos que para tales efectos establezca.

Corresponderá especialmente al Departamento de Cooperativas desarrollar las siguientes funciones:

- a) Interpretar administrativamente, mediante resoluciones de carácter general, la legislación especial que rige a las cooperativas, sus reglamentos y las demás normas que les sean aplicables, y absolver las consultas específicas que sobre estas materias le formulen las cooperativas o sus socios;
- b) Asesorar a los organismos públicos relacionados con la materia, en relación al sistema cooperativo e informar, a requerimiento de las autoridades competentes, los proyectos de ley y otras normas que incidan sobre él;
- c) Promover el desarrollo de programas y actividades orientados a perfeccionar la gestión empresarial en las cooperativas, su desarrollo organizacional y a obtener la plena incorporación de estas entidades al quehacer económico;
- d) Dictar normas e impartir instrucciones de carácter contable y administrativo para perfeccionar el funcionamiento de las cooperativas, pudiendo establecer normas especiales de contabilidad para determinadas clases de cooperativas, atendidas las necesidades de su funcionamiento, el número de socios, el capital o el volumen de sus operaciones;
- e) Dictar normas relativas a la confección y conservación de las actas, libros y documentos que el Departamento determine;
- f) Impartir a las entidades de revisión o supervisores auxiliares, a las juntas de vigilancia y a los inspectores de cuentas, normas sobre el desarrollo de sus funciones y contenido de los dictámenes e informes que deban emitir;
- g) Dictar las normas que deban observarse en las liquidaciones de las cooperativas e impartir instrucciones de carácter general a los miembros de sus comisiones liquidadoras o a sus liquidadores;
- h) Instruir con normas de carácter general a los organizadores de cooperativas que no llegasen a constituirse legalmente, a fin de procurar la restitución de los aportes que hubiesen recibido por dicho concepto;
- i) Requerir de las cooperativas que proporcionen, por las vías que el Departamento señale, suficiente y oportuna información a los socios y al público sobre su situación jurídica, económica, financiera y patrimonial, y
- j) Las demás que esta u otras leyes establezcan.

Artículo 109: Corresponderá al Departamento de Cooperativas la supervisión del cumplimiento de las leyes aplicables a las cooperativas y de sus normas reglamentarias y especialmente fiscalizar el funcionamiento societario, administrativo, contable y financiero de las cooperativas de importancia económica, con excepción de aquellas cuya fiscalización, sobre las mismas materias, se encuentre encomendada por la ley a otros organismos. Para los efectos de esta ley, se entenderá por cooperativas de importancia económica, las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas abiertas de vivienda y además todas aquellas cuyos activos sean iguales o superiores a 50.000 unidades de fomento o que tengan más de 500 socios.

Respecto de las cooperativas sometidas a su fiscalización, el Departamento de Cooperativas podrá:

- 1.- Controlar las operaciones y vigilar la marcha de estas cooperativas, con plenas facultades de inspección y revisión, pudiendo al efecto revisar los libros de contabilidad y sociales y documentación en general; requerir informes y antecedentes a sus representantes y efectuar comprobaciones y verificaciones materiales de las cuentas, gastos e inversiones, y requerir, en su caso, que en sus actas se deje testimonio o se inserten, parcial o íntegramente, sus comunicaciones;
- 2.- Representar a las cooperativas sometidas a su fiscalización las infracciones a la legislación aplicable a las cooperativas, sus reglamentos, estatutos, instrucciones del Departamento y demás normas que les sean aplicables, ordenándoles su corrección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 58 respecto de las multas;
- 3.- Objetar, suspender o prohibir la ejecución de cualquier acuerdo de las juntas generales, consejo de administración, comisiones liquidadoras de las cooperativas

sometidas a su fiscalización o de los socios administradores a que se refiere el artículo 61, contrario a la ley, su reglamento, estatutos, instrucciones del Departamento y demás normas que les sean aplicables. Podrá también autorizar la ejecución de dichos acuerdos cuando adolecieren de vicios producidos por defectos formales y sean indispensables para el correcto funcionamiento de la cooperativa.

Las resoluciones sobre la materia deberán ser fundadas y puestas en conocimiento del consejo o de la comisión liquidadora mediante carta certificada. Estos deberán ponerlas en conocimiento de los socios y de los terceros afectados, si los hubiese, y

4.- Ejercer las demás atribuciones que ésta u otras leyes le confieran.

Artículo 110: El organismo fiscalizador respectivo podrá examinar todos los libros, cuentas, archivos y documentos de las sociedades que pertenezcan en, al menos, un cincuenta por ciento a una cooperativa, para verificar que los derechos, obligaciones y resultados se reflejen adecuadamente en los informes y estados financieros de la cooperativa.

Artículo 111: Para el mejor desempeño de sus funciones fiscalizadoras, el Departamento podrá encargar la revisión del funcionamiento administrativo, contable, financiero y societario de las cooperativas sometidas a su fiscalización a entidades revisoras o de supervisión auxiliar, de carácter privado. Estas entidades podrán ser empresas clasificadoras de riesgo, empresas auditoras especializadas, institutos auxiliares de cooperativas y federaciones o confederaciones de cooperativas.

El Departamento de Cooperativas establecerá un sistema de acreditación de tales entidades y tendrá a su cargo un Registro Especial en el que deberán inscribirse los interesados. Podrá eliminar del registro a estas entidades o no renovar su inscripción, cuando no cumplan sus funciones y los requisitos establecidos.

El Departamento determinará las facultades con que estas entidades podrán actuar; fijará los requisitos técnicos que deban cumplir, con el fin de velar por la calidad, confiabilidad e idoneidad de sus funciones; dictará las normas relativas al cumplimiento de éstas y a los sistemas y procedimientos de trabajo; y, fijará los requisitos que deban cumplir y las garantías que deban rendir para su correspondiente inscripción.

El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción fijará, mediante Decreto Supremo, los aranceles que las entidades de revisión podrán cobrar a las cooperativas por los informes que deban emitir y las actuaciones que estas realicen en cumplimiento de sus funciones y los valores que el Departamento podrá cobrar a los interesados por sus propias actuaciones.

Artículo 112: Los funcionarios del Departamento de Cooperativas estarán obligados a guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de las cooperativas, siempre que tales documentos no tengan el carácter de públicos ni se trate de requerimientos de algún Poder del Estado.

Lo anterior no obstará a que el Jefe del Departamento de Cooperativas pueda difundir o hacer difundir por las personas y medios que determine, la información o documentos relativos a las cooperativas con el fin de velar por la fe pública o por el interés de los socios, pudiendo asimismo proporcionar antecedentes generales o particulares que permitan la confección de informes estadísticos, estudios e investigaciones sobre las cooperativas, siempre que no se trate de antecedentes comerciales o de otra índole, que por su naturaleza tengan el carácter de reservados.

El personal del Departamento de Cooperativas no podrá prestar servicios profesionales a las cooperativas.

CAPITULO V

DEL RECURSO DE LEGALIDAD Y DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Artículo 113: Las resoluciones o actos del Departamento de Cooperativas serán reclamables ante el juzgado de letras en lo civil del domicilio del requirente, dentro de los 30 días siguientes a la recepción o publicación de la resolución respectiva, según el caso, o a la realización del acto impugnado.

El tribunal resolverá breve y sumariamente, con audiencia del Departamento de Cooperativas, para lo cual deberán emplazarlo, a fin de que si lo estima pertinente evacue su informe dentro del plazo de 15 días más el aumento que corresponda de acuerdo a la tabla de emplazamiento para contestar demandas. Junto con su informe, deberá remitir al tribunal todos los antecedentes que obren en su poder y que estén relacionados con la materia reclamada.

El tribunal podrá disponer, de oficio o a petición de parte, que se practiquen aquellas diligencias que estime indispensables para la acertada resolución del reclamo.

La sentencia recaída en el reclamo será apelable; sin embargo, aquella que lo rechace será apelable en el solo efecto devolutivo. Tratándose de reclamaciones contra

resoluciones en que se impongan multas, la sentencia será apelable en los efectos suspensivo y devolutivo.

Artículo 114: Las controversias que se susciten entre los socios en su calidad de tales; entre éstos y las cooperativas de las que formen o hayan formado parte; y, entre las cooperativas entre sí, con relación a la interpretación, aplicación, validez o cumplimiento de la presente ley, su reglamento o los estatutos sociales, se resolverán por la justicia ordinaria con procedimiento de juicio sumario o mediante arbitraje, a elección del demandante. En este último caso, el arbitraje se sujetará a las normas que se establecen en los artículos siguientes.

Se resolverán bajo el mismo procedimiento, los conflictos jurídicos que surjan entre los oponentes a socios y los organizadores de cooperativas que no llegasen a constituirse legalmente, en especial respecto de la restitución de las sumas o aportes que hubiesen recibido; los relativos a la normalización de cooperativas que tengan un funcionamiento irregular; y los que se susciten con motivo de la designación de liquidadores y durante la liquidación misma de la cooperativa.

Artículo 115: La Confederación General de Cooperativas de Chile CONFECOOP-CHILE LIMITADA u otros organismos de integración de cooperativas, llevarán Registros de Arbitros, conforme a las disposiciones del Reglamento que se dicte al efecto.

Artículo 116: La designación del árbitro corresponderá a las partes de común acuerdo. En caso que no hubiese avenimiento o consentimiento entre las partes respecto de la persona del árbitro, el nombramiento se hará por la justicia ordinaria, debiendo en tal caso recaer dicho nombramiento en un solo individuo de los registros citados, y diverso del primero propuesto por cada parte.

A falta de Registro de Árbitros en el domicilio de la cooperativa, el nombramiento se hará por la justicia ordinaria, en la forma establecida en el Código de Procedimiento Civil para el nombramiento de peritos.

Artículo 117: Los árbitros serán nombrados en calidad de árbitros de derecho, a menos que las partes de común acuerdo los designen en otro carácter.

Artículo 118: El árbitro tendrá la facultad de exigir a las partes la provisión de fondos que estime necesaria para el pago de las costas procesales que requiriese la tramitación del juicio, aún cuando ella no fuere demandante. Lo anterior es sin perjuicio de lo que en la sentencia se determine, en conformidad a las reglas generales.

Artículo 119: Las controversias a que se refiere el presente Título, que sean sometidas al conocimiento de los Arbitros de Derecho, se tramitarán conforme al procedimiento sumario establecido en los artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 120: Será competente para conocer de los asuntos a que se refiere este capítulo el juez de letras en lo civil del lugar en que tenga su domicilio la cooperativa.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 121: A las entidades cooperativas que tengan, al 4 de mayo de 2003, el carácter de cooperativas especiales o agrícolas o de abastecimiento de energía eléctrica, conforme lo dispuesto en el decreto ley N° 3.351, de 1980, se les aplicará el título V del Capítulo II de esta ley, sin perjuicio de la aplicación supletoria del resto de sus disposiciones, en lo pertinente.

Las cooperativas agrícolas o de abastecimiento de energía eléctrica, podrán transformarse en especiales, de las regidas por el título V del Capítulo II de esta ley.

Lo expuesto no obsta a que las referidas cooperativas reformen sus estatutos con el objeto de quedar íntegramente sometidas a la presente ley.

Artículo 122: Las cooperativas extranjeras podrán constituir una agencia que opere en territorio nacional, de conformidad a las normas de la Ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas, y quedarán sujetas a las normas de la presente ley en lo que sea pertinente, pero no gozarán de los beneficios tributarios que la ley chilena reconoce a las cooperativas.

Artículo 123: La cooperativa deberá mantener en la sede principal y en sus sucursales y establecimientos, a disposición de los socios y de terceros, ejemplares actualizados de su estatuto firmados por el gerente, con indicación de la fecha y notaría en que se otorgó la

escritura social y la de sus modificaciones, en su caso, y de los datos referentes a sus legalizaciones.

Cada cooperativa deberá llevar un registro público indicativo de sus Consejeros, Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Gerentes o Liquidadores en su caso y apoderados, con especificación de las fechas de iniciación y término de sus funciones. Las designaciones y anotaciones que consten en dicho registro harán plena fe en contra de la cooperativa, sea a favor de los socios o de terceros.

Artículo 124: Deróganse las siguientes disposiciones legales y reglamentarias: La Ley N° 5.588; el título V de la Ley N° 5.604; el decreto ley N° 1.320, de 1976; el decreto con fuerza de ley N° 12, de 1968, del Ministerio de Agricultura; el decreto con fuerza de ley N° 13, de 1968, del Ministerio de Agricultura; el decreto supremo N° 595, de 1932, del Ministerio del Trabajo; el decreto supremo N° 85, del Ministerio del Trabajo; el decreto supremo N° 2.380, de 1948, del ex Ministerio de Obras Públicas y Vías de Comunicación; el decreto supremo N° 250, de 1958, del Ministerio de Agricultura; el decreto supremo N° 549, de 1964, del Ministerio de Agricultura; el decreto supremo N° 1.044, de 1965, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; el decreto supremo N° 497, de 1967, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; el decreto supremo N° 1.230, de 1969, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; la ley N° 18.023; el artículo 80 de la ley N° 18.899 y el decreto supremo N° 289, de 1975, del Ministerio de Agricultura.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1º.- Se continuará aplicando con respecto a las cooperativas de colonización agrícola, agropecuarias de reforma agraria y de reforma agraria, que hayan sido disueltas, voluntaria o forzosamente, con anterioridad a la publicación en el Diario Oficial de la ley N° 18.755, la letra d) de su artículo 2º transitorio.

Artículo 2º.- Las cooperativas en formación al 4 de mayo del 2003, respecto de las cuales no se haya dictado el decreto o resolución que autorice su existencia, se ceñirán al procedimiento de constitución establecido en la presente ley.

Artículo 3º.- El Departamento de Cooperativas podrá ejercer las facultades que contempla el inciso segundo del artículo 47 de la Ley General de Cooperativas, respecto de las cooperativas que hayan sido disueltas forzosamente antes del 4 de mayo del 2003 y cuya junta general de socios no haya designado a su comisión liquidadora.

Artículo 4º.- Las cooperativas abiertas de vivienda y las de ahorro y crédito actualmente existentes deberán enterar el patrimonio exigido en el plazo de un año contado desde el 4 de noviembre del 2002.

Artículo 5º.- Las cooperativas de vivienda que hayan obtenido créditos hipotecarios con anterioridad al 4 de noviembre del 2002 y que no hayan pagado íntegramente su deuda, requerirán el previo consentimiento expreso del acreedor hipotecario para adjudicar en dominio las viviendas a sus socios.

Artículo 6º.- Los valores acumulados en fondos de reserva, que en conformidad a las disposiciones de esta ley tenían el carácter de irrepartibles durante la vigencia de la cooperativa, mantendrán dicho carácter, hasta concurrencia del monto expresado en el balance correspondiente al 31 de diciembre del 2001.

Artículo 7º.- Las cooperativas que al 4 de mayo del 2003 estuvieran obligadas a constituir un fondo de responsabilidad mantendrán dicha responsabilidad mientras los créditos que lo originan tengan saldo deudor.

El fondo de responsabilidad se incrementará hasta que alcance un 20% del saldo de dividendos por pagar. Los últimos dividendos se podrán pagar con cargo a dicho fondo. En todo caso, se aplicará con respecto a ese fondo lo dispuesto en el artículo 40.

Artículo 8º.- Las cooperativas existentes al 4 de mayo del 2003, junto con la primera reforma de estatutos que acuerden, deberán adecuar los mismos a las normas de la presente ley, e inscribir y publicar un extracto del nuevo estatuto, que contendrá las menciones indicadas en los artículos 7 y 8 de este cuerpo legal.

Junto con lo anterior se inscribirá un extracto emitido por el Departamento de Cooperativas, que contenga el acta de la Junta General Constitutiva y sus actas complementarias, rectificatorias o modificatorias. Para estos efectos, el citado Departamento podrá requerir a la Subsecretaría de Agricultura o a otros organismos

públicos, los antecedentes relativos a las cooperativas campesinas o de otro tipo, que hayan sido autorizadas por ellos.

En todo caso, las cooperativas sometidas a fiscalización deberán cumplir con lo dispuesto en este artículo dentro del plazo de un año desde el 4 de mayo del 2003.

Artículo 9°.- Las cooperativas de ahorro y crédito que al 4 de mayo del 2003 se encuentren sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en virtud de lo establecido en el artículo 4° transitorio de la Ley General de Bancos, quedarán en la situación descrita en dicho artículo y no podrán realizar las nuevas operaciones que esta ley autoriza, mientras no hayan cumplido las condiciones señaladas en el artículo 87.

Artículo 10.- Las entidades que al 4 de mayo del 2003 tengan el carácter de uniones de cooperativas, se tendrán por el solo ministerio de la ley por federaciones, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley.

Artículo 11.- La ley 19.832 entró en vigencia el 4 de mayo del 2003.

Tómese razón, comuníquese y publíquese.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.- Alvaro Díaz Pérez, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción (S.).
Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Andrea Butelmann Peisajoff, Subsecretaria de Economía, Fomento y Reconstrucción (S.).

4.10. COLOMBIA

LEY 79/1988

POR LA QUE SE ACTUALIZA LA LEGISLACION COOPERATIVA (del 23 de diciembre de 1988)

TITULO PRELIMINAR

OBJETIVOS DE LA PRESENTE LEY

Artículo 1

El propósito de la presente ley es dotar al sector cooperativo de un marco propicio para su desarrollo como parte fundamental de la economía nacional, de acuerdo con los siguientes objetivos:

1. Facilitar la aplicación práctica de la doctrina y los principios del cooperativismo.
2. Promover el desarrollo del derecho cooperativo como rama especial del ordenamiento jurídico general.
3. Contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y la economía social.
4. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia, mediante una activa participación.
5. Fortalecer el apoyo del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal al sector cooperativo.
6. Propiciar la participación del sector cooperativo en el diseño y ejecución de los planes y programas de desarrollo económico y social.
7. Propender al fortalecimiento y consolidación de la integración cooperativa en sus diferentes manifestaciones.

Artículo 2

Declárese de interés común la promoción, la protección y el ejercicio del cooperativismo como un sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución de la propiedad y de ingreso, a la racionalización de todas las actividades económicas y a la regulación de tarifas, tasas, costos y precios, en favor de la comunidad y en especial de las clases populares.

El Estado garantiza el libre desarrollo del cooperativismo, mediante el estímulo, la protección y la vigilancia, sin perjuicio de la autonomía de las organizaciones cooperativas.

TITULO I

DEL ACUERDO COOPERATIVO

Capítulo I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3

Es acuerdo cooperativo el contrato que se celebra por un número determinado de personas, con el objetivo de crear y organizar una persona jurídica de derecho privado denominado cooperativa, cuyas actividades deben cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de lucro.

Toda actividad económica, social o cultural puede organizarse con base en el acuerdo cooperativo.

Artículo 4

Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes de los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. Se presume que una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro, cuando cumpla los siguientes requisitos:

1. Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación, la del remanente patrimonial.
2. Que destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte de los mismos en proporción al uso servicios o a la participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su valor real.

Artículo 5

Toda cooperativa deberá reunir las siguientes características:

1. Que tanto el ingreso de los asociados como su retiro sean voluntarios.
2. Que el número de asociados sea variable e ilimitado.
3. Que funcione de conformidad con el principio de la participación democrática.
4. Que realice de modo permanente actividades de educación cooperativa.
5. Que se integre económica y socialmente al sector cooperativo.
6. Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados sin consideración a sus aportes.
7. Que su patrimonio sea variable e ilimitado; no obstante, los estatutos establecerán un monto mínimo de aportes sociales no reducibles durante la existencia de la cooperativa.
8. Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación, la del remanente.
9. Que tenga una duración indefinida en los estatutos, y
10. Que se promueva la integración con otras organizaciones de carácter popular que tengan por fin promover el desarrollo integral del hombre.

Artículo 6

A ninguna cooperativa le será permitido:

1. Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas.
2. Establecer con sociedades o personas mercantiles, combinaciones o acuerdos que hagan participar a éstas, directa o indirectamente de los beneficios o prerrogativas que las leyes otorgan a las cooperativas.
3. Conceder ventajas o privilegios a los promotores o fundadores, o preferencias a una porción cualquiera de los aportes sociales.
4. Desarrollar actividades distintas a las enumeradas en sus estatutos, y
5. Transformarse en sociedad comercial.

Artículo 7

Serán actos cooperativos los realizados entre sí por las cooperativas, o entre éstas y sus propios asociados, en desarrollo de su objeto social.

Artículo 8

Serán sujetos de la presente ley las personas naturales o jurídicas que participen en la realización del objeto social de las cooperativas, las cooperativas, los organismos cooperativos de segundo y tercer grado, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las pre-cooperativas, en lo pertinente las formas asociativas previstas en el artículo 130 de la presente ley y de manera subsidiaria las entidades de que trata el artículo 131 de esta ley.

Artículo 9

Las cooperativas serán de responsabilidad limitada. Para los efectos de este artículo se limita la responsabilidad de los asociados al valor de sus aportes y la responsabilidad de la cooperativa para con terceros, al monto del patrimonio social.

Artículo 10

Las cooperativas prestarán preferencialmente sus servicios al personal asociado. Sin embargo, de acuerdo con sus estatutos podrán extenderlos al público no afiliado, siempre en razón del interés social o del bienestar colectivo. En tales casos, los excedentes que se obtengan serán llevados a un fondo social no susceptible, de repartición.

Artículo 11

Las cooperativas podrán asociarse con entidades de otro carácter jurídico, a condición de que dicha asociación sea conveniente para el cumplimiento de su objeto social y que con ello no se desvirtúe ni su propósito de servicio, ni el carácter no lucrativo de sus actividades.

Artículo 12

Las cooperativas acompañarán a su razón social la palabra "Cooperativa" o "Cooperativo".

Estas denominaciones sólo podrán ser usadas por las entidades reconocidas como tales por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, y en todas sus manifestaciones públicas como avisos, publicaciones y propaganda deberán presentar el número y fecha de la resolución de reconocimiento de personería jurídica o del registro que en su defecto reglamente el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas.

Capítulo II

DE LA CONSTITUCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS COOPERATIVAS

Artículo 13

En desarrollo del acuerdo cooperativo, las cooperativas se constituirán por documento privado y su personería jurídica será reconocida por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas.

Artículo 14

La constitución de toda cooperativa se hará en Asamblea de constitución, en la cual serán aprobados los estatutos y nombrados en propiedad los órganos de administración y vigilancia.

El Consejo de Administración allí designado nombrará el representante legal de la entidad, quien será responsable de tramitar el reconocimiento de la personería jurídica. El acta de la Asamblea de constitución será firmada por los asociados fundadores, anotando su documento de identificación legal y el valor de sus aportes iniciales. El número mínimo de fundadores será de veinte, salvo las excepciones consagradas en normas especiales.

Artículo 15

El reconocimiento de personería jurídica se hará con base en los siguientes requisitos:

1. Solicitud escrita de reconocimiento de personería jurídica.
2. Acta de la asamblea de constitución.
3. Texto completo de los estatutos.
4. Constancia de pago de por lo menos el veinticinco por ciento (25 por 100) de los aportes iniciales suscritos por los fundadores, expedida por el representante legal de la cooperativa, y
5. Acreditar la educación cooperativa por parte de los fundadores, con una intensidad no inferior a veinte (20) horas.

Parágrafo. La educación cooperativa de los sectores indígenas y agropecuarios será impartida por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas.

Artículo 16

El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas deberá resolver sobre el reconocimiento de personería jurídica dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo de la solicitud. Si no lo hiciere dentro del término previsto, operará el silencio administrativo positivo y la cooperativa podrá iniciar actividades. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la ocurrencia del silencio administrativo, el Departamento

Administrativo Nacional de Cooperativas deberá visitar la cooperativa a fin de verificar que esté totalmente ajustada a la ley y a los estatutos. En caso de encontrarse la ocurrencia de violaciones se le formulará un pliego de observaciones para que se ajuste a él dentro del término previsto en las normas reglamentarias, cuyo incumplimiento dará lugar a que se aplique la escala general de sanciones.

Artículo 17

En el acto de reconocimiento de personería jurídica se ordenará el registro de la cooperativa, el de los órganos de administración y vigilancia y el de su representante legal, debidamente identificado y se autorizará su funcionamiento.

Artículo 18

Para todos los efectos legales será prueba de la existencia de una cooperativa y de su representación legal, la certificación que expida el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas.

Artículo 19

Los estatutos de toda cooperativa deberán contener:

1. Razón social, domicilio y ámbito territorial de operaciones.
2. Objeto del acuerdo cooperativo y enumeración de sus actividades.
3. Derechos y deberes de los asociados; condiciones para su admisión, retiro y exclusión y determinación del órgano competente para su decisión.
4. Régimen de sanciones, causales y procedimientos.
5. Procedimientos para resolver diferencias o conflictos transigibles entre los asociados o entre éstos y la cooperativa, por causa o con ocasión de actos cooperativos.
6. Régimen de organización interna, constitución, procedimientos y funciones de los órganos de administración y vigilancia, condiciones, incompatibilidades y forma de elección y remoción de sus miembros.
7. Convocatoria de asambleas ordinarias y extraordinarias.
8. Representación legal; funciones y responsabilidades
9. Constitución e incremento patrimonial de la cooperativa; reservas y fondos sociales, finalidades forma de utilización de los mismos.
10. Aportes sociales mínimos no reducibles durante la vida de la cooperativa; forma de pago y devolución; procedimiento para el avalúo de los aportes en especie o en trabajo.
11. Forma de aplicación de los excedentes cooperativos.
12. Régimen y responsabilidad de las cooperativas y de sus asociados.
13. Normas para fusión, incorporación, transformación, disolución y liquidación.
14. Procedimientos para reforma y estatutos, y
15. Las demás estipulaciones que se consideren necesarias para asegurar el adecuado cumplimiento del acuerdo cooperativo y que sean compatibles con su objeto social.

Parágrafo 1.º Los estatutos serán reglamentados por el Consejo de Administración, con el propósito de facilitar su aplicación en el funcionamiento interno y en la prestación de servicios.

Parágrafo 2.º Los estatutos de las cooperativas de indígenas se adecuarán a la realidad económico-social y a las tradiciones culturales de las respectivas comunidades, en concordancia con lo dispuesto en las normas especiales sobre la materia.

Artículo 20

Las reformas de los estatutos de las cooperativas deberán ser aprobadas en asamblea general y sancionadas por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas.

El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas sancionará las reformas estatutarias dentro de los dos meses siguientes a la fecha de recepción del acta correspondiente. Si no lo hiciere dentro del término previsto, operará el silencio administrativo positivo.

Capítulo III DE LOS ASOCIADOS

Artículo 21

Podrán ser asociados de las cooperativas:

1. Las personas naturales legalmente capaces y los menores de edad que hayan cumplido catorce años. O quienes sin haberlos cumplido, se asocien a través de representante legal.
2. Las personas jurídicas de derecho público.
3. Las personas jurídicas del sector cooperativo y las demás de derecho privado sin ánimo de lucro.
4. Las empresas o unidades económicas cuando los propietarios trabajen en ellas y prevalezca el trabajo familiar o asociado.

Artículo 22

La calidad de asociado de una cooperativa se adquiere:

1. Para los fundadores, a partir de la fecha de la asamblea de la constitución, y
2. Para los que ingresen posteriormente, a partir de la fecha que sean aceptados por el órgano competente.

Artículo 23

Serán derechos fundamentales de los asociados:

1. Utilizar los servicios de la cooperativa y realizar con ella las operaciones propias de su objeto social.
2. Participar en las actividades de la cooperativa y en su administración, mediante el desempeño de cargos sociales.
3. Ser informados de la gestión de la cooperativa de acuerdo con las prescripciones estatutarias.
4. Ejercer actos de decisión y elección en las asambleas generales.
5. Fiscalizar la gestión de la cooperativa, y
6. Retirarse voluntariamente de la cooperativa

El ejercicio de los derechos estará condicionado al cumplimiento de los deberes.

Artículo 24

Serán deberes especiales a los asociados:

1. Adquirir conocimientos sobre los principios básicos del cooperativismo, características del acuerdo cooperativo y estatutos que rigen la entidad.
2. Cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo cooperativo.
3. Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y vigilancia.
4. Comportarse solidariamente en sus relaciones con la cooperativa y con sus asociados de la misma, y
5. Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la estabilidad económica o el prestigio social de la cooperativa.

Artículo 25

La calidad de asociado se perderá por muerte, disolución cuando se trate de personas jurídicas, retiro voluntario o exclusión.

Parágrafo. Los estatutos de las cooperativas establecerán los procedimientos para el retiro de los asociados que pierdan alguna de las calidades o condiciones exigidas para serlo.

Capítulo IV

DE LA ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA

Artículo 26

La administración de las cooperativas estará a cargo de la Asamblea General, el Consejo de Administración y el Gerente.

Artículo 27

La Asamblea General es el órgano máximo de administración de las cooperativas y sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, reglamentarias o estatutarias. La constituye la reunión de los asociados hábiles o de los delegados elegidos por éstos.

Parágrafo. Son asociados hábiles, para efectos del presente artículo, los inscritos en el registro social que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con los estatutos o reglamentos.

Artículo 28

Las reuniones de Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias deberán celebrarse dentro de los tres primeros meses del año calendario para el cumplimiento de sus funciones regulares, excepción hecha de las entidades de integración que las celebrarán dentro de los primeros cuatro meses. Las extraordinarias podrán reunirse en cualquier época del año, con el objeto de tratar asuntos imprevistos o de urgencia que no puedan postergarse hasta la siguiente asamblea general ordinaria.

Las asambleas generales extraordinarias sólo podrán tratarlos asuntos para los cuales fueron convocados y los que se deriven estrictamente de éstos.

Artículo 29

Los estatutos podrán establecer que la Asamblea General de los asociados se sustituya por Asamblea General de Delegados, cuando aquélla se dificulte en razón del número de asociados que determinen los estatutos, o por estar domiciliados en diferentes municipios del país, o cuando su realización resultare desproporcionadamente onerosa en consideración a los recursos de la cooperativa. El número mínimo de delegados será de veinte.

En este evento los delegados serán elegidos en el número y para el período previstos en los estatutos y el Consejo de Administración reglamentará el procedimiento de elección que en todo caso deberá garantizar la adecuada información y participación de los asociados.

A la Asamblea General de delegados le serán aplicables, en lo pertinente, las normas relativas a la Asamblea General de asociados.

Artículo 30

Por regla general la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, será convocada por el Consejo de Administración, para la fecha, hora y lugar determinados. La Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal, o un quince por ciento mínimo de los asociados, podrán solicitar al Consejo de Administración, la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria.

Los estatutos de las cooperativas determinarán los procedimientos y la competencia para efectuar la convocatoria a Asamblea General Ordinaria, cuando el Consejo de Administración no la realice dentro del plazo establecido en la presente ley o desatienda la petición de convocar la Asamblea Extraordinaria. La convocatoria se hará conocer a los asociados hábiles o delegados elegidos, en la forma y términos previstos en los estatutos. La Junta de Vigilancia verificará la lista de asociados hábiles e inhábiles y la relación de estos últimos será publicada para conocimiento de los afectados.

Artículo 31

La asistencia de la mitad de los asociados hábiles o de los delegados convocados constituirá quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas; si dentro de una hora siguiente a la convocatoria no se hubiere integrado este quórum, la Asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de asociados no inferior al diez por ciento del total de los asociados hábiles, ni el cincuenta por ciento del número requerido para constituir una cooperativa. En las Asambleas Generales de delegados el quórum mínimo será el cincuenta por ciento de los elegidos y convocados. Una vez constituido el quórum, éste no se entenderá desintegrado por el retiro de alguno o algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el quórum mínimo a que se refiere el inciso anterior.

Artículo 32

Por regla general las decisiones de la Asamblea General se tomarán por mayoría absoluta de los votos de los asistentes. Para las reformas de estatutos, la fijación de aportes extraordinarios, la amortización de aportes, la transformación, la fusión, la incorporación y la disolución para liquidación, se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los asistentes.

La elección de órganos o cuerpos plurales se hará mediante los procedimientos y sistemas que determinen los estatutos o reglamentos de cada cooperativa. Cuando se adopte el de listas o planchas, se aplicará el sistema de cociente electoral.

Artículo 33

En las Asambleas Generales corresponderá a cada asociado un sólo voto, salvo la excepción consagrada en el artículo 96 de la presente ley. Los asociados o delegados convocados no podrán delegar su representación en ningún caso y para ningún efecto.

Las personas jurídicas asociadas a la cooperativa participarán en las Asambleas de éstas, por intermedio de su representante legal o de la persona que éste designe.

Artículo 34

La Asamblea General ejercerá las siguientes funciones:

- 1.^a Establecer las políticas y directrices generales de la cooperativa para el cumplimiento del objeto social.
- 2.^a Reformar los estatutos.
- 3.^a Examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia.
- 4.^a Aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio.
- 5.^a Destinar los excedentes del ejercicio económico conforme a lo previsto en la ley y los estatutos.
- 6.^a Fijar aportes extraordinarios.
- 7.^a Elegir los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia.
- 8.^o Elegir el Revisor Fiscal y su suplente y su suplente y fijar su remuneración, y
- 9.^a Las demás que le señalen los estatutos y las leyes.

Artículo 35

El Consejo de Administración es el órgano permanente de administración subordinado a las directrices y políticas de la Asamblea General.

El número de integrantes, su período, las causales de remoción y sus funciones serán fijadas en los estatutos, los cuales podrán consagrar la renovación parcial de sus miembros en cada Asamblea.

Las Atribuciones del Consejo de Administración serán las necesarias para la realización del objeto social. Se considerarán atribuciones implícitas las no asignadas expresamente a otros órganos por la ley o los estatutos.

Artículo 36

Cuando una persona natural actúen en la Asamblea General en representación de una persona jurídica asociada en la cooperativa y sea elegida como miembro del Consejo de Administración, cumplirá sus funciones en interés de la cooperativa; en ningún caso en el de la entidad que representa.

Artículo 37

El Gerente será el representante legal de la cooperativa y el ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración. Será nombrado por éste y sus funciones serán precisadas en los estatutos.

Artículo 38

Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que el Estado ejerce sobre la cooperativa, ésta contará con una Junta de Vigilancia y un Revisor Fiscal.

Artículo 39

La Junta de Vigilancia estará integrada por asociados hábiles en número no superior a tres, con sus respectivos suplentes; su período y las causales de remoción serán fijadas en los estatutos.

Artículo 40

Son funciones de la Junta de Vigilancia:

- 1.^a Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y en especial a los principios cooperativos.
- 2.^a Informar a los órganos de administración, al Revisor Fiscal y al Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas sobre las irregularidades que existan en el funcionamiento de la cooperativa y presentar recomendaciones sobre las medidas que en su concepto deben adoptarse.
- 3.^a Conocer los reclamos que presenten los asociados en relación con la prestación de los servicios, transmitidos y solicitar los correctivos por el conducto regular y con la debida oportunidad.
- 4.^a Hacer llamadas de atención a los asociados cuando incumplan los deberes consagrados en la ley, los estatutos y reglamentos.
- 5.^a Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya lugar a ello y velar porque el órgano competente se ajuste al procedimiento establecido para el efecto.
- 6.^a Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en las Asambleas o para elegir delegados.

7.^a Rendir informes sobre sus actividades a la Asamblea General Ordinaria, y
8.^a Las demás que le asigne la ley o los estatutos, siempre y cuando se refieran al control social y no correspondan a funciones propias de la auditoría interna o revisaría fiscal, salvo en aquellas cooperativas eximidas de revisor fiscal por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas.

Artículo 41

Por regla general la cooperativa tendrá un Revisor Fiscal con su respectivo suplente, quienes deberán ser Contadores Públicos con matrícula vigente; el Departamento administrativo Nacional de Cooperativas podrá eximir a la cooperativa de tener Revisor Fiscal cuando las circunstancias económicas o de ubicación geográfica o el número de asociados lo justifiquen.

Artículo 42

El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas podrá autorizar que el servicio de Revisoría Fiscal sea prestado por organismos cooperativos de segundo grado, por instituciones auxiliares del cooperativismo, o por cooperativas de trabajo asociado que contemplen dentro de su objeto social la prestación de este servicio, a través de Contador Público con matrícula vigente.

Artículo 43

Las funciones del Revisor Fiscal serán señaladas en los estatutos y reglamentos de la cooperativa y se determinarán teniendo en cuenta las atribuciones asignadas a los Contadores Públicos en las normas que regulan el ejercicio de la profesión, así como en aquellas que exigen de manera especial la intervención, certificación o firma de dicho profesional.

Ningún Contador Público podrá desempeñar el cargo de Revisor Fiscal en la cooperativa de la cual sea asociado.

Artículo 44

Las actas de las reuniones de los órganos de administración y vigilancia de la cooperativa, debidamente firmadas y aprobadas, serán pruebas suficientes de los hechos que consten en ellas.

Artículo 45

Compete a los Jueces Civiles Municipales el conocimiento de las impugnaciones de los actos o decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración de las cooperativas, cuando no se ajusten a la ley o a los estatutos, o cuando excedan los límites del acuerdo cooperativo. El procedimiento será el abreviado previsto en el Código de Procedimiento Civil.

Capítulo V

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 46

El patrimonio de las cooperativas estará constituido por los aportes sociales individuales y los amortizados, los fondos y reservas de carácter permanente y las donaciones o auxilios que se reciban con destino al incremento patrimonial.

Artículo 47

Los aportes sociales ordinarios o extraordinarios que hagan los asociados pueden ser satisfechos en dinero, en especie o trabajo convencionalmente avaluados. Parágrafo. Podrá establecerse en los estatutos un procedimiento para mantener el poder adquisitivo constante de los aportes sociales, dentro de los límites que fije el reglamento de la presente ley y sólo para ejercicios económicos posteriores a la iniciación de su vigencia.

Esta revalorización de aportes se hará con cargo al Fondo de que trata el numeral 1.º del artículo 54 de la presente ley.

Artículo 48

Los aportes sociales de los asociados, se acreditarán mediante certificaciones o constancias expedidas según lo dispongan los estatutos y en ningún caso tendrán el carácter de títulos valores.

Artículo 49

Los aportes sociales de los asociados quedarán directamente afectados desde su origen en favor de la cooperativa como garantía de las obligaciones que contraigan con ella.

Tales aportes no podrán ser gravados por sus titulares a favor de terceros, serán inembargables y sólo podrán cederse a otros asociados en los casos y en la forma que prevean los estatutos y reglamentos.

Artículo 50

Ninguna persona natural podrá tener más de diez por ciento de los aportes sociales de una cooperativa y ninguna persona jurídica más del cuarenta y nueve por ciento de los mismos.

Artículo 51

Prestará mérito ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria, para el cobro de los aportes ordinarios o extraordinarios que los asociados adeuden a la cooperativa, la certificación que expida ésta en que conste la causa y la liquidación de la deuda, con la constancia de su notificación en la forma prescrita en los reglamentos de la cooperativa.

Artículo 52

Las cooperativas podrán establecer en sus estatutos, la amortización parcial o total de los aportes sociales hechos por los asociados, mediante la constitución de un fondo especial cuyos recursos provendrán del remanente a que se refiere el numeral 4.º, del artículo 54 de la presente ley. En este caso la amortización se hará en igualdad de condiciones para los asociados.

Parágrafo. Esta amortización será procedente cuando la cooperativa haya alcanzado un grado de desarrollo económico que le permita efectuar los reintegros y mantener y proyectar sus servicios, a juicio de la Asamblea General.

Artículo 53

Las cooperativas tendrán ejercicios anuales que se cerrarán el 31 de diciembre. Al término de cada ejercicio se cortarán las cuentas y se elaborará el balance, el inventario y el estado de resultados.

Artículo 54

Si del ejercicio resultaren, éstos se aplicarán de la siguiente forma: un veinte por ciento como mínimo para crear y mantener una reserva de protección de los aportes sociales; un veinte por ciento como mínimo para el Fondo de Educación y un diez por ciento mínimo para un Fondo de Solidaridad.

El remanente podrá aplicarse, en todo o parte, según lo determinen los estatutos o la Asamblea General, en la siguiente forma:

1. Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las alteraciones en su valor real.
2. Destinándolo a servicios comunes y seguridad social.
3. Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los servicios o la participación en el trabajo.
4. Destinándolo a un fondo para amortización de aportes de los asociados.

Artículo 55

No obstante lo previsto en el artículo anterior el excedente de las cooperativas se aplicará en primer término a compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Cuando la reserva de protección de los aportes sociales se hubiere empleado para compensar pérdidas, la primera aplicación de excedentes será la de establecer la reserva al nivel que tenían antes de su utilización.

Artículo 56

Las cooperativas podrán crear por decisión de la Asamblea General otras reservas y fondos con fines determinados. Igualmente podrán prever en sus presupuestos y registrar en su contabilidad incrementos progresivos de las reservas y fondos con cargo al ejercicio anual.

Capítulo VI

DEL RÉGIMEN DE TRABAJO

Artículo 57

El trabajo de las cooperativas estará preferentemente a cargo de los propios asociados. Los trabajadores de las cooperativas tendrán derecho a ser admitidos en ellas como asociados, si lo permite la naturaleza propia de las actividades sociales y las condiciones que para el efecto deben reunir los asociados.

Artículo 58

Los asociados de las cooperativas podrán prestar a éstas, en las etapas iniciales de su funcionamiento, o en períodos de grave crisis económica, servicios personales a modo de colaboración solidaria y con carácter gratuito o convencionalmente retribuido. En estos casos el ofrecimiento del asociado deberá constar por escrito, especificándose el tiempo y la excepcionalidad del servicio. El ofrecimiento del trabajo solidario es revocable por el asociado en cualquier momento.

Artículo 59

En las cooperativas de trabajo asociado en que los aportantes de capital son al mismo tiempo los trabajadores y gestores de la empresa, el régimen de trabajo, de previsión, seguridad social y compensación, será establecido en los estatutos y reglamentos en razón a que se originan en el Acuerdo Cooperativo y, por consiguiente, no estará sujeto a la legislación laboral aplicable a los trabajadores dependientes y las diferencias que surjan, se someterán al procedimiento arbitral previsto en el Título XXXIII del Código de Procedimiento Civil o a la justicia laboral ordinaria. En ambos casos, se deberán tener en cuenta las normas estatutarias, como fuente de derecho. Las compensaciones por el trabajo aportado y el retorno de los excedentes previstos en el artículo 54 numeral 3.º de la presente ley, se hará teniendo en cuenta la función del trabajo, la especialidad, el rendimiento y la cantidad de trabajo aportado. Sólo en forma excepcional y debidamente justificada, las cooperativas de trabajo asociado podrán vincular trabajadores ocasionales o permanentes no asociados; en tales casos, estas relaciones, se rigen por las normas de la legislación laboral vigente. En las cooperativas que no sean de trabajo asociado, el régimen laboral ordinario se aplicará totalmente a los trabajadores dependientes y a los trabajadores que a la vez sean asociados.

Artículo 60

Las cooperativas podrán convenir o contratar con las cooperativas de trabajo asociado a la ejecución del trabajo total o parcial que aquellas requieran para la realización de las actividades de su objeto social.

**Capítulo VII
CLASES DE COOPERATIVAS**

Artículo 61

Las cooperativas en razón del desarrollo de sus actividades podrán ser especializadas, multiactivas e integrales.

Artículo 62

Serán cooperativas especializadas las que se organizan para atender una necesidad específica, correspondiente a una sola rama de actividad económica, social y cultural. Estas cooperativas podrán ofrecer servicios diferentes a los establecidos en su objeto social, mediante la suscripción de convenios con otras entidades cooperativas.

Artículo 63

Serán cooperativas multiactivas las que se organizan para atender varias necesidades, mediante concurrencia de servicios en una sola entidad jurídica. Los servicios deberán ser organizados en secciones independientes, de acuerdo con las características de cada tipo especializado de cooperativa.

Artículo 64

Serán cooperativas integrales aquellas que en desarrollo de su objeto social, realicen dos o más actividades conexas y complementarias entre sí, de producción, distribución, consumo y prestación de servicios.

Artículo 65

En todo caso, las cooperativas podrán comprender en su objeto social la prestación de servicios de previsión, asistencia y solidaridad para sus miembros.

**Capítulo VIII
DISPOSICIONES ESPECIALES APLICABLES A ALGUNOS TIPOS DE COOPERATIVAS**

Artículo 66

En las cooperativas especializadas de consumo, la vinculación deberá ser abierta a todas las personas que puedan hacer uso de sus servicios y que acepten las responsabilidades inherentes a la asociación.

Artículo 67

Los artículos o productos que se refiere el inciso segundo del artículo 233 del Código Penal, con referencia a las cooperativas, corresponden exclusivamente a los víveres, artículos o productos de primera necesidad obtenidos de cooperativas de consumo.

Artículo 68

Las cooperativas de educación serán de usuarios o de trabajadores y podrán atender los distintos niveles o grados de enseñanza incluyendo la educación superior. Serán asociados los propios sujetos de la educación, si reúnen las condiciones del artículo 21 de la presente ley, o en caso contrario, los padres o acudientes. Aquellas cooperativas que asocien trabajadores de la educación serán consideradas como de trabajo asociado.

Artículo 69

Las editoriales, librerías, papelerías y las empresas fabricantes de materiales básicos de educación los venderán a las cooperativas de educación y trabajadores de la educación a precios de mayoristas, agentes o concesionarios. Para tales efectos, se aplicará lo establecido en el artículo 137 de la presente ley.

Artículo 70

Las cooperativas de trabajo asociado son aquellas que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios.

Artículo 71

Las cooperativas de trabajo asociado se constituirán con un mínimo de diez asociados, y las que tengan menos de veinte, en los estatutos o reglamentos deberán adecuar los órganos de administración y vigilancia a las características particulares de la cooperativa, especialmente al tamaño del grupo asociado, a las posibilidades de división del trabajo y la aplicación de la democracia directa, así como también a las actividades específicas de la empresa.

Artículo 72

Los organismos de carácter cooperativo que presten servicios de seguros deberán ser especializados y cumplirán la actividad aseguradora principalmente en interés de sus propios asociados y de la comunidad vinculada a ellos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 56 de la presente ley, cuando los servicios de previsión y solidaridad a que se refiere el artículo 65 de la presente ley, requieran de una base técnica que los asimile a seguros, deberán ser contratados con organismos cooperativos especializados en este ramo, o con otras entidades aseguradoras legalmente establecidas; las entidades que actualmente los presten podrán continuar haciéndolo, a menos que, requeridas por el organismo correspondiente del Estado, no demuestren su competencia técnica y económica para hacerlo.

Artículo 73

Los aportes y las reservas técnicas de los organismos cooperativos de seguros, se destinarán a los bienes y depósitos necesarios para una eficaz operación y a inversiones en instituciones del sector cooperativo o del sector público, atendiendo en todo caso a la seguridad, liquidez y rentabilidad necesarias.

Artículo 74

Los organismos cooperativos de seguros, de acuerdo con la filosofía cooperativa, no estarán en principio sometidos a la intermediación de agencias, agentes o corredores de seguros. No obstante, los estatutos podrán disponer lo contrario.

Artículo 75

Las cooperativas de transporte serán, separada o conjuntamente, de usuarios del servicio, trabajadores o propietarios asociados, para la producción y prestación del mismo.

Parágrafo. Las cooperativas de transporte en sus diferentes modalidades gozarán de los siguientes beneficios:

1. El Gobierno estimulará la constitución de cooperativas que tengan por objeto el servicio público de transporte automotor y reglamentará su campo de acción,

- organización y funcionamiento. Para su constitución no se exigirá la autorización previa del Instituto Nacional de Transporte o de la entidad que haga sus veces.
2. Las cooperativas en las diferentes modalidades de transporte, tendrán prelación en la asignación de rutas, horarios y capacidad transportadora, siempre y cuando estén en igualdad de condiciones con los demás interesados en la prestación del servicio.
 3. Las ensambladoras de vehículos, las fábricas de llantas y la industria en general, venderán directamente sus productos a las cooperativas de transporte en sus diferentes modalidades, a los mismos precios que tengan para sus agentes y concesionarios. Para tales efectos, se aplicará lo establecido en el artículo 137 de la presente ley.
 4. Para formalizar la desvinculación de un vehículo que haga parte de una cooperativa de transporte, se requiere de la prestación previa del paz y salvo de la cooperativa a la cual el vehículo esté inscrito.

Artículo 76

Las cooperativas de vivienda que tengan por objeto organizar y desarrollar conjuntos habitacionales de propiedad cooperativa, y en las cuales los asociados sean simultáneamente aportadores y usuarios del conjunto habitacional, podrán limitar la asociación al número de unidades de vivienda que contemple el programa.

Artículo 77

En las cooperativas de vivienda de propiedad cooperativa, los terrenos, las viviendas, las construcciones de todo orden y demás elementos adheridos al inmueble serán de propiedad exclusiva de la cooperativa. En las cooperativas de vivienda de propiedad cooperativa los asociados tendrán derecho a la utilización plena y exclusiva de la unidad que se le asigne mediante contrato escrito en el que conste la identificación de la vivienda asignada y las condiciones de utilización. Igualmente tendrán derecho al uso de las áreas o zonas comunes que posea el conjunto de acuerdo con el reglamento interno de la cooperativa. El valor de los aportes de los asociados en las cooperativas de vivienda de propiedad cooperativa, será igual al valor final de la unidad asignada reajustado anualmente mediante los procedimientos de corrección monetaria que establezcan los estatutos.

Artículo 78

Las cooperativas de vivienda de propiedad cooperativa sólo podrán constituir gravámenes hipotecarios diferentes de los que tengan por objeto garantizar préstamos para compra de los terrenos y construcción del conjunto habitacional, cuando así lo acuerde la Asamblea General con el voto favorable del setenta por ciento (70%) de los asociados.

Artículo 79

Además de las reservas ordinarias, las cooperativas de vivienda de propiedad cooperativa constituirán, mediante cuotas periódicas de los asociados, un fondo para mantenimiento, reparaciones, reconstrucción o mejoras de los bienes del conjunto habitacional. Para el cobro de este tipo de cuotas prestará mérito ejecutivo la certificación que expida la cooperativa, en que conste la causa y la liquidación de la deuda con la constancia de su notificación en la forma prescrita en los reglamentos de la cooperativa.

Artículo 80

Cuando las cooperativas de vivienda de propiedad cooperativa amplíen su objetivo social para organizar servicios que correspondan a necesidades conexas o complementarias de los asociados, tales como educación, consumo, salud, transporte y recreación, serán considerados como cooperativas integrales o multiactivas, según el caso y las instalaciones y construcciones destinadas a tales servicios, se entenderán incorporados al conjunto habitacional, para todos los efectos legales.

Artículo 81

Los asociados a las cooperativas de vivienda de propiedad cooperativa, sólo podrán ser excluidos por decisión final de la Asamblea General y la restitución de las unidades habitacionales ocupadas por ellos o por cesionarios temporales, se hará mediante el trámite del proceso verbal que establece el Código de Procedimiento Civil.

Artículo 82

La reglamentación contenida en los artículos anteriores se entenderá sin perjuicio de la existencia de las cooperativas de vivienda de propiedad individual.

Artículo 83

Además de lo previsto en otras leyes sobre la materia, habrá lugar a la liquidación parcial de cesantías, cuando su inversión se destine a satisfacer necesidades de vivienda, a través de planes adelantados por organismos cooperativos debidamente autorizados.

Parágrafo. Los fabricantes de materiales básicos de construcción clasificados como tales por el Ministerio de Desarrollo o por el Instituto de Crédito Territorial, los venderán a las cooperativas de vivienda a precios de mayoristas, agentes o concesionarios.

Para tales efectos, se aplicará lo establecido en el artículo 137 de la presente ley.

Artículo 84

Las cooperativas agropecuarias, agroindustriales, psicólicas y mineras podrán ser de trabajadores o de propietarios o de ambas modalidades y para su constitución les será aplicable lo dispuesto en el artículo 71 de la presente ley.

Artículo 85

Las cooperativas agropecuarias podrán desarrollar sus actividades por medio de la explotación colectiva o individual de la tierra y los bienes vinculados a ella, dentro de la más amplia concepción contractual, pudiendo incluso celebrar contratos de fideicomiso con asociados o terceros.

Artículo 86

Las cooperativas relacionadas en este Capítulo se regirán en primer término por las disposiciones especiales aplicables a cada una de ellas, y en segundo lugar, por las disposiciones de carácter general.

Artículo 87

Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, regulará los tipos específicos de cooperativas de acuerdo con las necesidades de fomento del cooperativismo y con sujeción en todo caso, a los principios y características del acuerdo cooperativo previsto en esta ley.

Capítulo IX

DE LA EDUCACIÓN COOPERATIVA

Artículo 88

Las cooperativas están obligadas a realizar de modo permanente, actividades que tiendan a la formación de sus asociados y trabajadores en los principios, métodos y características del cooperativismo, así como para capacitar a los administradores en la gestión empresarial propia de cada cooperativa.

Las actividades de asistencia técnica, de investigación y de promoción del cooperativismo, hacen parte de la educación cooperativa que establece la presente ley.

Artículo 89

Se podrá dar cumplimiento a la obligación del artículo anterior, mediante la delegación o ejecución de programas conjuntos realizados por organismos cooperativos de segundo grado o por instituciones auxiliares del cooperativismo especializadas en educación cooperativa.

Artículo 90

En los estatutos o reglamentos de toda cooperativa deberá preverse el funcionamiento de un comité u órgano de la administración encargado de orientar y coordinar las actividades de educación cooperativa y de elaborar cada año un plan o programa con su correspondiente presupuesto, en el cual se incluirá la utilización del Fondo de Educación.

Artículo 91

Las actividades escolares de ahorro, consumo, suministro y demás servicios complementarios, tendrán una finalidad educativa y se realizarán por intermedio de talleres cooperativos, cuyo funcionamiento será reglamentado por el Ministerio de Educación Nacional en asocio con el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas.

Capítulo X

DE LA INTEGRACIÓN COOPERATIVA

Artículo 92

Las cooperativas podrán asociarse entre sí para el mejor cumplimiento de sus fines económicos o sociales en organismos de segundo grado de carácter nacional o regional. Aquéllos de índole económica serán especializados en determinado ramo o actividad. En los organismos de segundo grado podrán participar, además fondos de empleados, asociaciones mutualistas, denominadas sociedades mutuarías por la Ley 24 de 1931 y demás instituciones sin ánimo de lucro que puedan contribuir a beneficiarse de las actividades que desarrollen estos organismos. Los organismos de segundo grado de carácter nacional, requieren para constituirse un número mínimo de diez cooperativas. Los de carácter regional se constituirán con no menos de cinco cooperativas.

Parágrafo. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, excepcionalmente y cuando las condiciones socioeconómicas lo justifiquen, podrá autorizar la participación en los organismos de segundo grado de carácter económico, en calidad de asociados, a personas naturales, con derecho a participar hasta en una tercera parte en los órganos de administración y vigilancia, para garantizar la representación mayoritaria de las cooperativas.

Los derechos de votación de las personas naturales asociadas se regirán de acuerdo con el artículo 33 de la presente ley, sin admitir la excepción consagrada en el artículo 96 de esta ley.

Artículo 93

Los organismos cooperativos de segundo grado y las instituciones auxiliares del cooperativismo, podrán crear organismos de tercer grado de carácter asociativo, con el fin de unificar la acción de defensa y representación del movimiento nacional e internacional.

Un organismo de tercer grado sólo podrá constituirse con un número no inferior a doce entidades, y en sus estatutos determinará la participación de las entidades del sector cooperativo y la forma de su integración.

Artículo 94

Los organismos cooperativos podrán, directamente o en forma conjunta, crear instituciones auxiliares del cooperativismo orientadas exclusivamente al cumplimiento de actividades de apoyo o complementación de su objeto social. Igualmente podrán ser reconocidas como tales por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas las entidades que no teniendo naturaleza jurídica cooperativa, carezcan de ánimo de lucro y realicen actividades orientadas al desarrollo del sector cooperativo.

Las instituciones auxiliares cuyos miembros sean personas naturales, podrán asociarse a organismos cooperativos de segundo grado. Aquellas cuyos miembros sean personas jurídicas, podrán asociarse a organismos cooperativos de tercer grado.

Artículo 95

Las cooperativas podrán también convenir la realización de una o más operaciones en forma conjunta, estableciendo cuál de ellas debe asumir la gestión y la responsabilidad ante terceros.

Artículo 96

Los organismos cooperativos de segundo y tercer grado deberán establecer en los estatutos el régimen de voto y representación proporcional al número de asociados, al volumen de operaciones con la entidad, o a una combinación de estos factores, fijando un mínimo y un máximo que asegure la participación de sus miembros e impidan el predominio excluyente de algunos de ellos.

Artículo 97

A los organismos mencionados en el presente capítulo les serán aplicables, en lo pertinente, las normas legales previstas para las cooperativas.

Capítulo XI

DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE LOS BANCOS COOPERATIVOS

Artículo 98

Las entidades del sector cooperativo podrán organizar, bajo la naturaleza jurídica cooperativa, instituciones financieras en sus diversas modalidades que se regirán por las disposiciones propias de éstas, en concordancia con las del régimen cooperativo.

Su constitución se sujetará a las normas generales de las respectivas instituciones financieras y quedarán sometidas integralmente al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria.

Parágrafo. No obstante lo dispuesto en este artículo, los organismos cooperativos de segundo grado de carácter financiero que a la fecha de la sanción de la presente ley cuenten con certificado de autorización de la Superintendencia Bancaria, podrán solicitar su reconocimiento como bancos, para lo cual el Superintendente juzgará la conveniencia de tal reconocimiento, se cerciorará de la idoneidad, la responsabilidad y el carácter de los solicitantes, y si el bienestar público será fomentado con dicho reconocimiento.

Artículo 99

La actividad financiera del cooperativismo se ejercerá siempre en forma especializada por las entidades a que se refiere el presente capítulo, las cooperativas de ahorro y crédito o de seguros, y por los organismos cooperativos de segundo grado e instituciones auxiliares del cooperativismo de carácter financiero o de seguros, con sujeción a las normas que regulan dicha actividad.

Bajo las circunstancias especiales y cuando condiciones sociales y económicas lo justifiquen, el Gobierno Nacional podrá autorizar a las cooperativas multiactivas e integrales que tengan sección especializada para el ejercicio de la actividad financiera. En concordancia con el artículo 151 de la presente ley, la actividad financiera y demás aspectos contables y operativos de los organismos cooperativos de segundo grado e instituciones auxiliares del cooperativismo de carácter financiero o de seguros, estarán sometidos a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, en los términos del Decreto-Ley 1939 de 1986 y demás disposiciones complementarias. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas ejercerá en los demás asuntos las funciones propias de su competencia; no obstante, para sancionar reformas estatutarias de dichas entidades, solicitará concepto previo de la Superintendencia Bancaria.

Capítulo XII

DE LA FUSIÓN, INCORPORACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 100

Las cooperativas podrán fusionarse o incorporarse cuando su objeto social sea común o complementario.

Artículo 101

Cuando dos o más cooperativas, se fusionen, se disolverán sin liquidarse y constituirán una nueva cooperativa, con denominación diferente, que se hará cargo del patrimonio de las cooperativas disueltas.

Artículo 102

En caso de incorporación, la cooperativa o cooperativas incorporadas se disuelven sin liquidarse y su patrimonio se transfiere a la incorporante.

Artículo 103

La fusión requerirá la aprobación de las asambleas generales de las cooperativas que se fusionan. Para la incorporación se requerirá la aprobación de la asamblea general de la cooperativa cooperativas incorporadas. La cooperativa incorporante aceptará la incorporación por resolución de la asamblea general o del consejo de administración, según lo dispongan los estatutos.

Artículo 104

En caso de incorporación la cooperativa incorporante, y en el de fusión, la nueva cooperativa, se subrogará en todos los derechos y obligación de las cooperativas incorporadas o fusionadas.

Artículo 105

La fusión o incorporación requerirán el reconocimiento del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, para lo cual, las cooperativas interesadas deberán presentar los nuevos estatutos y todos los antecedentes y documentos referentes a la fusión o a la incorporación.

Artículo 106

Las cooperativas podrán ser disueltas por acuerdo de asamblea general, especialmente convocadas por el efecto y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 32 de la presente ley. La resolución de disolución deberá ser comunicada al Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, dentro de los quince días hábiles siguientes a la realización de la asamblea, para los fines legales pertinentes.

Artículo 107

Las cooperativas deberán disolverse por una cualquiera de las siguientes causas:

1. Por acuerdo voluntario de los asociados.
2. Por reducción de los asociados a menos del número mínimo exigible para su constitución, siempre que esta situación se prolongue por más de seis meses.
3. Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para el cual fue creada.
4. Por fusión o incorporación a otra cooperativa.
5. Por haberse iniciado contra ella concurso de acreedores, y
6. Porque los medios que empleen para el cumplimiento de sus fines o porque las actividades que desarrollan sean contrarias a la ley, las buenas costumbres o al espíritu del cooperativismo.

Artículo 108

En los casos previstos en los numerales 2.º, 3.º y 6.º del artículo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, dará a la Cooperativa un plazo de acuerdo con lo establecido en la norma reglamentaria, para que se subsane la causal, o para que, en el mismo término, convoque asamblea general con el fin de acordar la disolución. Si transcurrido dicho término, la cooperativa no demuestra haber subsanado la causal o no hubiese reunido asamblea, el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas decretará la disolución y nombrará liquidador o liquidadores.

Artículo 109

Cuando la disolución haya sido acordada por la Asamblea General, ésta designará el liquidador o liquidadores, de acuerdo con sus estatutos. Si el liquidador o liquidadores, no fueren nombrados, o no entraren en funciones dentro de los treinta días siguientes a su nombramiento, el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas procederá a nombrarlos, según el caso.

Artículo 110

La disolución de las cooperativas, cualquiera que sea el origen de la decisión, será registrada por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas. Igualmente deberá ser puesta en conocimiento público por la cooperativa, mediante aviso en un periódico de circulación regular con el domicilio principal de la entidad que se disuelve.

Artículo 111

Disuelta la cooperativa, se procederá a su liquidación. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto social y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación. En tal caso deberá adicionar su razón social con la expresión "en liquidación".

Artículo 112

La aceptación del cargo de liquidador o liquidadores, la posesión y la prestación de la fianza, se harán ante el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, o a falta de éste, ante la primera autoridad administrativa del domicilio de la cooperativa, dentro de los quince días hábiles siguientes a la comunicación de su nombramiento.

Artículo 113

Los liquidadores actuarán de consumo y las discrepancias que se presenten entre ellos serán resueltas por los asociados. El liquidador o liquidadores tendrán la representación legal de la cooperativa.

Artículo 114

Cuando sea nombrada liquidadora una persona que administre bienes de la cooperativa, no podrá ejercer el cargo sin que previamente se aprueben las cuentas de su gestión, por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas. Si transcurridos treinta días desde la fecha de su designación, no se hubieren aprobado dichas cuentas, se procederá a nombrar nuevo liquidador.

Artículo 115

El liquidador o liquidadores deberán informar a los acreedores y a los asociados del estado de liquidación en que se encuentra la cooperativa, en forma apropiada.

Artículo 116

Los asociados podrán reunirse cuando lo estimen necesario, para conocer el estado de liquidación y dirimir las discrepancias que se presenten entre los liquidadores. La convocatoria se hará por un número de asociados superior al veinte por ciento (20%) de los asociados de la cooperativa al momento de su disolución.

Artículo 117

A partir del momento en que se ordene la liquidación, las obligaciones a término a cargo de la cooperativa, se hacen exigibles, pero sus bienes no podrán ser embargados.

Artículo 118

Serán deberes del liquidador o liquidadores los siguientes:

1. Concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución.
2. Formar inventario de los activos patrimoniales, de los pasivos de cualquier naturaleza, de los libros y de los documentos y papeles.
3. Exigir cuenta de su administración a las personas que hayan manejado intereses de la cooperativa y no hayan obtenido el finiquito correspondiente.
4. Liquidar y cancelar las cuentas de la cooperativa con terceros y con cada uno de los asociados.
5. Cobrar los créditos, percibir su importe y otorgar los correspondientes finiquitos.
6. Enajenar los bienes de la cooperativa.
7. Presentar estado de liquidación cuando los asociados lo soliciten.
8. Rendir cuentas periódicas de su mandato y al final de la liquidación, obtener del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas su finiquito.
9. Las demás que se deriven de la naturaleza de la liquidación y del propio mandato.

Artículo 119

Los honorarios del liquidador o liquidadores serán fijados y regulados por la entidad que los designe y en el mismo acto de su nombramiento. Cuando el nombramiento del liquidador o liquidadores corresponda al Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, los honorarios se fijarán de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto expida la mencionada entidad.

Artículo 120

En la liquidación de las cooperativas deberá procederse al pago de acuerdo con el siguiente orden de prioridades:

1. Gastos de liquidación.
2. Salarios y prestaciones sociales ciertos y ya causados al momento de la disolución.
3. Obligaciones fiscales.
4. Créditos hipotecarios y prendarios.
5. Obligaciones con terceros, y
6. Aportes de los asociados.

Cuando se trate de cooperativas autorizadas para captar recursos de asociados y de terceros, estos depósitos se excluirán de la masa de la liquidación. En los procesos de liquidación serán transferidos a la entidad cooperativa que los estatutos hayan previsto o, a falta de disposición estatutaria, a un fondo para la investigación cooperativa administrado por un organismo cooperativo de tercer grado. el gobierno reglamentará lo referente a este último beneficiario cuando haya varios organismos en la misma situación.

**TITULOII
DEL SECTOR COOPERATIVO****Capítulo I
DE LOS COMPONENTES DEL SECTOR****Artículo 122**

Las cooperativas, los organismos cooperativos de segundo y tercer grado, las instituciones auxiliares del cooperativismo y las precooperativas, constituyen el sector cooperativo.

Capítulo II DE LAS INSTITUCIONES AUXILIARES

Artículo 123

Son instituciones auxiliares del cooperativismo las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se constituyan de conformidad con el artículo 94 de la presente ley, con el objeto de incrementar y desarrollar el sector cooperativo, mediante el cumplimiento de actividades orientadas a proporcionar preferentemente a los organismos componentes del sector cooperativo el apoyo y ayuda necesarios para facilitar el mejor logro de sus propósitos económicos y sociales.

Las instituciones auxiliares limitarán su objeto social a una sola línea de actividad y sus áreas afines.

Capítulo III DE LAS PRECOOPERATIVAS

Artículo 124

Se consideran precooperativas los grupos que, bajo la orientación y con el concurso de una entidad promotora, se organicen para realizar actividades permitidas a las cooperativas y, que por carecer de capacidad económica, educativa, administrativa, o técnica, no es ente en posibilidad inmediata de organizarse como cooperativas.

Artículo 125

Las precooperativas deberán evolucionar hacia cooperativas, en un término de cinco años prorrogables a juicio del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas.

Artículo 126

Las entidades promotoras estarán obligadas a prestar a las precooperativas que ellas promuevan, asistencia técnica, administrativa o financiera, así como atender a la formación y capacitación de sus asociados para impulsar su desarrollo y asegurar su evolución.

Artículo 127

Las entidades promotoras participarán en la administración y en el control de las precooperativas, en la forma y término que los estatutos establezcan, especialmente en los aspectos de que trata el artículo anterior. Tal participación deberá disminuir gradualmente, a fin de garantizar la responsabilidad y la autonomía decisoria de los asociados.

Artículo 128

El régimen de constitución, reconocimiento y funcionamiento de las precooperativas será establecido por el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta las necesidades de simplificación de los requisitos, procedimientos y trámites y su naturaleza transitoria y evolutiva.

Parágrafo. Para los fines del presente artículo se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República, por un término de seis meses, contados a partir de la sanción de la presente ley.

Artículo 129

Los estatutos de las precooperativas deberán contener el objeto social, el régimen de asociación, las formas simplificadas de administración y vigilancia, el régimen económico y financiero y el procedimiento para la reforma de los estatutos y para su conversión en cooperativa.

Parágrafo. A las precooperativas les serán aplicables, en lo pertinente, las disposiciones propias del tipo de cooperativas en las que posteriormente se organicen.

Capítulo IV DE OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS

Artículo 130

Las empresas de servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas, establecidas por la Nación, los departamentos, intendencias y comisarías y los municipios o distritos municipales, mediante leyes, ordenanzas o acuerdos, serán consideradas como formas asociativas para los efectos de este título y podrán constituirse con un mínimo de cinco entidades.

Artículo 131

A los fondos de empleados, asociaciones mutualistas, denominadas sociedades mutuarías por la Ley 24 de 1981, y a las entidades de que trata el artículo anterior, les serán aplicables, en su subsidio de disposiciones legales y normas estatutarias, las disposiciones de la presente ley mientras el Gobierno expide los estatutos correspondientes.

De conformidad con el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el término de seis meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, para expedir las normas reguladoras de las entidades previstas en este artículo, en concordancia con las siguientes materias: naturaleza jurídica de estas entidades y sus características básicas; constitución de las respectivas formas asociativas; requisitos y trámites para el reconocimiento de personerías jurídicas; contenido básico de los correspondientes estatutos sociales; calidad de asociados, adquisición y pérdida de tal calidad, sus derechos y deberes, el régimen económico y financiero de estas entidades, reglas especiales sobre servicios; órganos de representación, dirección, administración y control; fusión, incorporación y transformación; integración; normas de funcionamiento; medidas de promoción; fomento y estímulo par alas referidas entidades; causales de disolución y procedimientos de liquidación; regímenes de responsabilidades y sanciones para los asociados, directivos y administradores.

Artículo 132

Los organismos de que trata el presente capítulo podrán asociarse a cooperativas y a organismos de segundo grado e instituciones auxiliares del cooperativismo, según lo establezcan los estatutos de la respectiva entidad.

TITULO III**DE LAS RELACIONES DEL ESTADO CON LAS COOPERATIVAS****Capítulo I****DEL FOMENTO ECONÓMICO COOPERATIVO****Artículo 133**

El Gobierno Nacional adoptará las políticas, normas y procedimientos adecuados para asegurar el acceso de las cooperativas a los programas y recursos financieros de fomento, necesarios para promover el desarrollo del sector cooperativo, particularmente las que se orienten a incrementar la producción y el empleo. También garantizará el acceso de las cooperativas a las fuentes de distribución de bienes y servicios, en condiciones de libre competencia y determinación equitativa de cantidades, calidades y precios.

Artículo 134

El desarrollo y fomento cooperativos estarán a cargo de los organismos cooperativos de segundo y tercer grado y para tales efectos el Gobierno canalizará preferentemente a través de los organismos cooperativos de carácter financiero, los recursos financieros destinados para tales fines.

Artículo 135

Además de lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto-ley 1.700, los organismos cooperativos podrán contratar con el Instituto de Seguros Sociales la prestación de servicios a cargo de esta institución. Dichos contratos o convenios no se ajustarán a lo dispuesto en las normas sobre contratación administrativa. El Gobierno Nacional determinará las condiciones y contenidos de los contratos y convenios entre los organismos cooperativos y el Instituto de Seguros Sociales.

Artículo 136

Las normas del presente capítulo se aplicarán sin perjuicio de otras contempladas en disposiciones especiales.

Artículo 137

La industria en general y el comercio mayorista venderán directamente sus productos a las cooperativas, a precios de mayoristas, agentes o concesionarios, de acuerdo con la demanda que tengan éstas y sus asociados y a la oferta de productos existentes en el mercado.

La renuncia a cumplir la presente disposición dentro del término reglamentario, a partir de la solicitud elevada por la cooperativa, acarreará las sanciones que deberá imponer el organismo competente, de conformidad con las reglamentaciones. Parágrafo. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, dictará y aplicará las normas necesarias para que la producción, comercialización, distribución y consumo de bienes y la prestación de servicios por parte de las cooperativas, apunten al objetivo social de regulación del mercado, al cual se refiere el título preliminar de esta ley. Así mismo, este Departamento Administrativo reglamentará las relaciones entre el vendedor y las cooperativas compradoras, según los tipos de productos.

Artículo 138

Adiciónese el artículo 22 de la Ley 11 de 1986 , el cual quedará así:

"Artículo 22

Las Juntas de Acción Comunal, las sociedades de mejora y ornato, las juntas y asociaciones de recreación, defensa civil y usuarios y los organismos cooperativos, constituidos con arreglo a la ley y sin ánimo de lucro, que tengan sede en el respectivo distrito, podrán vincularse al desarrollo y mejoramiento de los municipios mediante su participación en el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios que se hallen a cargo de éstos. Con tal fin, dichas juntas y organizaciones celebrarán con los municipios y sus entidades descentralizadas los convenios, acuerdos o contratos a que hubiere lugar para el cumplimiento o la ejecución de determinadas funciones u obras. Parágrafo. Para el cumplimiento de los objetivos del respectivo contrato o convenio, las entidades contratantes podrán aportar o prestar determinados bienes."

Capítulo II

DE LOS DERECHOS Y EXENCIONES

Artículo 139

Créase el Consejo Nacional Cooperativo, como un organismo asesor y consultivo del Gobierno Nacional, el cual estará integrado por:

1. El Jefe del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado, quien lo presidirá.
2. El Secretario General de la Presidencia de la República o su delegado.
3. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado.
4. El Ministro de Educación Nacional, o su delegado.
5. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, o su delegado.
6. El Ministro de Desarrollo, o su delegado.
7. El Ministro de Agricultura, o su delegado.
8. El Ministro de Salud, o su delegado.
9. El Jefe del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas o su delegado, quien actuará como Secretario Ejecutivo.
10. Un representante, con su respectivo suplente, por cada una de las siguientes líneas de actividad del cooperativismo, ahorro y crédito, vivienda, educación, transporte, agropecuaria, consumo, seguros, trabajo asociado, salud y gremio de cooperativas. Estos representantes serán designados por el Gobierno Nacional, de ternas que presenten los organismos cooperativos de tercer grado, para períodos de dos años.

Artículo 140

El Consejo Nacional Cooperativo hará recomendaciones al Gobierno Nacional, sobre los siguientes puntos:

1. Orientación de la política cooperativista del Estado.
2. Expedición de normas que propicien un adecuado desarrollo del sector cooperativo.
3. Adopción de fórmulas sobre la participación del cooperativismo en los planes y programas de desarrollo nacionales y de medidas y políticas para el sector cooperativo en materias fiscal, monetaria, de salud, de educación, de vivienda, de empleo, de crédito, de transporte y de seguridad social.

Parágrafo. El Consejo Nacional Cooperativo se reunirá en forma ordinaria tres veces al año y en la forma extraordinaria a petición de la mitad, al menos, de los representantes del sector cooperativo a que se refiere el numeral 10 del artículo anterior. Las convocatorias serán hechas por el Presidente. El Consejo Deliberará por lo menos, con diez de sus integrantes y las decisiones se tomarán por la mayoría de sus asistentes.

Artículo 141

El Gobierno Nacional podrá autorizar a las entidades del sector público para manejar e invertir sus recursos económicos en los organismos cooperativos de segundo grado e instituciones auxiliares del cooperativismo de carácter financiero y en las cooperativas de ahorro y crédito que ejerzan la actividad financiera.

Artículo 142

Toda persona, empresa o entidad pública o privada estará obligada a deducir y retener de cualquier cantidad que haya de pagar a sus trabajadores o pensionados, las sumas que estos se adeuden a la cooperativa, y que la obligación conste en libranza, títulos valores, o cualquier otro documento suscrito por el deudor, quien para el efecto deberá dar su consentimiento previo.

Parágrafo. Las personas, empresas o entidades obligadas a retener deben entregar las sumas retenidas a la cooperativa, simultáneamente con el pago que hace al trabajador o pensionado. Si por su culpa no lo hicieren, serán responsable ante la cooperativa de su omisión y quedarán solidariamente deudoras ante ésta de las sumas dejadas de retener o entregar, junto con los intereses de la obligación contraída por el deudor.

Artículo 143

Para los efectos del artículo anterior, prestará mérito ejecutivo la relación de asociados deudores, con la prueba de haber sido entregada para el descuento con antelación de por lo menos diez días hábiles.

Artículo 144

Las deducciones en favor de las cooperativas tendrán prelación sobre cualquier otro descuento por obligaciones civiles, salvo las judiciales por alimentos.

Artículo 145

El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, podrá limitar en forma total o parcial, el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 142 de la presente ley, a las cooperativas que hagan uso indebido de éstos, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.

Artículo 146

Las cooperativas de consumo como entidades reguladoras de precios no están sujetas a las normas sobre prácticas comerciales restrictivas.

Artículo 147

Los organismos cooperativos tendrán prelación obligatoria y tratamiento especial en la adjudicación de contratos con el Estado, siempre que cumplan los requisitos legales y se encuentren en iguales o mejores condiciones frente a los demás proponentes.

Capítulo III

DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Artículo 148

Las cooperativas, los titulares de sus órganos de administración y vigilancia y los liquidadores, serán responsables por los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento de las normas legales y estatutarias y se hará acreedores a las sanciones que más adelante se determinen, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones.

Artículo 149

Los miembros del Consejo de Administración y el Gerente serán responsables por violación de la ley, los estatutos o los reglamentos. Los miembros del Consejo serán eximidos de responsabilidades mediante la prueba de no haber participado en la reunión o de haber salvado expresamente su voto.

Artículo 150

Los terceros serán igualmente responsables y se les aplicarán las sanciones previstas en la ley, por el uso indebido de la denominación "Cooperativa", "Cooperativo" o la abreviatura "Coop." o por actos que impliquen aprovechamiento de derechos y exenciones concedidas a las cooperativas.

Capítulo IV

DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA GUBERNAMENTAL

Artículo 151

Las cooperativas estarán sujetas a la inspección y vigilancia permanente del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, de conformidad con la ley, con la finalidad de asegurar que los actos atinentes a su constitución, funcionamiento, cumplimiento del objeto social y disolución y liquidación se ajusten a las normas legales y estatutarias.

Además de las facultades de inspección y vigilancia que corresponden al Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, los organismos cooperativos se someterán a la inspección y vigilancia concurrentes de otras entidades del Estado, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones. Las funciones de inspección y vigilancia no implican por ningún motivo facultad de coestión o intervención en la autonomía jurídica y democrática de las cooperativas.

TITULO IV DE LAS DISPOSICIONES FINALES

Capítulo I DE LAS ADICIONES Y MODIFICACIONES A LA LEY 24 DE 1981

Artículo 152

Adiciónase la Ley 24 de 1981 con un artículo nuevo que como artículo 44 de la mencionada ley, quedará así:

"Artículo 44

El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, sancionará a las cooperativas por las decisiones adoptadas en la Asamblea, contrarias a ley o a los estatutos."

Artículo 153

Adiciónase la Ley 24 de 1981 con un artículo nuevo que como artículo 45 de la mencionada ley, quedará así:

"Artículo 45

El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas sancionará también a los titulares de los órganos de administración y vigilancia, a los empleados y a los liquidadores de las cooperativas, por las infracciones que les sean personalmente imputables, señaladas a continuación:

- 1.^a Utilizar la denominación o el acuerdo cooperativo para encubrir actividades o propósitos especulativos o contrarios a las características de las cooperativas, o no permitidos a éstas, por las normas legales vigentes.
- 2.^a No aplicar los fondos de educación y solidaridad a los fines legales y estatutariamente establecidos.
- 3.^a Repartir entre los asociados las reserva, auxilios o donaciones de carácter patrimonial.
- 4.^a Acreditar a los asociados excedentes cooperativos por causas distintas a las previstas en la ley.
- 5.^a Avaluar arbitrariamente los aportes en especie o adulterar las cifras consignadas en los balances.
- 6.^a Admitir como asociados a quienes no puedan serlo por prescripción legal o estatutaria.
- 7.^a Ser renuente a los actos de inspección y vigilancia.
- 8.^a Realizar actos de disposición excediendo las facultades establecidas.
- 9.^a No asignar a las reservas y fondos obligatorios las cantidades que correspondan de acuerdo con la ley, los estatutos y los reglamentos internos.
10. No presentar oportunamente a la Asamblea General los informes, balances y estados financieros que deban ser sometidos a la Asamblea para su aprobación.
11. No convocar a la Asamblea General en el tiempo y con las formalidades estatutarias.
12. No observar en la liquidación las formalidades previstas en la ley y los estatutos.
13. Las derivadas del incumplimiento de los deberes y funciones previstos en la ley o los estatutos."

Artículo 154

Adiciónase la Ley 24 de 1981 con un artículo nuevo que como artículo 46 de la mencionada ley, quedará así:

"Artículo 46

Las sanciones aplicables por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas por los hechos contemplados en los artículos 44 y 45 de la presente ley, serán los siguientes:

- 1.^aLlamada de atención.

2.^a Cobro de multas hasta del uno por ciento del capital social de la persona jurídica o hasta cien veces el salario mínimo legal mensual, respectivamente, según se trate de sanciones a entidades o a personas naturales.

3.^a Prohibición temporal o definitiva para el ejercicio de una o más actividades específicas.

4.^a Declaración de inhabilidad para el ejercicio de cargos de entidades del sector cooperativo hasta por cinco años, y

5.^a Orden de disolución y liquidación de la cooperativa con la correspondiente cancelación de la persona jurídica."

Artículo 155

Adiciónase la Ley 24 de 1981 con un artículo nuevo que como artículo 47 de la mencionada ley, quedará así:

"Artículo 47

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere el artículo anterior, con la excepción de la del numeral 1.º, será necesaria investigación previa. En todo caso, las entidades o personas inculpadas deberán tener la oportunidad de presentar sus descargos."

Artículo 156

Modifícase el artículo 41 de la Ley 24 de 1981, la cual quedará así:

"Artículo 41

Las providencias del Jefe del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas serán susceptibles de recursos de reposición ante el mismo funcionario y surtido éste se entenderá agotado el procedimiento gubernativo respecto de ellas. Las providencias de los funcionarios subalternos tendrán el recurso de reposición ante los mismos y el de apelación ante su superior inmediato para agotar tal procedimiento. En cualquiera de estos eventos, la actuación administrativa se cumplirá con sujeción, en todo caso, a las normas generales previstas en el Código Contencioso Administrativo."

Artículo 157

La inspección y vigilancia que ejerce el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas sobre los organismos cooperativos de mera representación y defensa del movimiento cooperativo, no podrá recaer sobre las actividades que desarrollen para el cumplimiento de su objetivo fundamental.

Capítulo II

DE LAS NORMAS SUPLETORIAS

Artículo 158

Los casos no previstos en esta ley o en sus reglamentos, se resolverán primeramente conforme a la doctrina y a los principios cooperativos generalmente aceptados. En último término se recurrirá para resolverlos a las disposiciones generales sobre asociaciones, fundaciones y sociedades que por su naturaleza sean aplicables a las cooperativas.

Capítulo III

DE LA APLICACIÓN Y VIGENCIA DE ESTE LEY Y DEROGACIÓN DE NORMAS

Artículo 159

En un plazo de dos años, contados a partir de la fecha de vigencia de esta ley, las entidades del sector cooperativo constituidas con anterioridad a dicha fecha, deberán adaptar sus estatutos a las prescripciones de la misma.

Artículo 160

La presente ley deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el **Decreto-Ley 1598** de 1963 y sus normas reglamentarias y los artículos 5.º, 8.º, numeral, 19; 9, 25, numeral 5; 28, numeral 2, y 29 numeral 2 de la Ley 24 de 1981.

Artículo 161

La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

- **LEY 454/1998**

LEY 454 DE 1998 (agosto 4) por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

TÍTULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPITULO PRIMERO

Principios generales

Artículo 1º. Objeto. El objeto de la presente ley es el determinar el marco conceptual que regula la economía solidaria, transformar el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía solidaria, crear la superintendencia de la economía solidaria, crear el fondo de garantías para las cooperativas financieras y de ahorro y crédito, dictar normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y expedir otras disposiciones en correspondencia con lo previsto en los artículos 58, 333 y concordantes de la Constitución Política de Colombia.

Artículo 2º. Definición. Para efectos de la presente ley denominase Economía Solidaria al sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía.

Artículo 3º. Protección, promoción y fortalecimiento. Declárase de interés común la protección, promoción y fortalecimiento de las cooperativas y demás formas asociativas y solidarias de propiedad como un sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución de la propiedad y del ingreso y a la racionalización de todas las actividades económicas, en favor de la comunidad y en especial de las clases populares.

Parágrafo. El Estado garantizará el libre desarrollo de las Entidades de Economía Solidaria, mediante el estímulo, promoción, protección y vigilancia, sin perjuicio de su natural autonomía.

CAPITULO SEGUNDO

Marco conceptual

Artículo 4º. Principios de la Economía Solidaria. Son principios de la Economía Solidaria:

1. El ser bueno, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía sobre los medios de producción.
2. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua.
3. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora.
4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta.
5. Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción.
6. Participación económica de los asociados, en justicia y equidad.
7. Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna y progresiva.
8. Autonomía, autodeterminación y autogobierno.
9. Servicio a la comunidad.
10. Integración con otras organizaciones del mismo sector.
11. Promoción de la cultura ecológica.

Artículo 5º. Fines de la Economía Solidaria. La Economía solidaria tiene como fines principales:

1. Promover el desarrollo integral del ser humano.
2. Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento solidario, crítico, creativo y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y la paz de los pueblos.
3. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa.
4. Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social.
5. Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna.

Artículo 6º. Características de las organizaciones de Economía Solidaria. Son sujetos de la presente ley las personas jurídicas organizadas para realizar actividades sin ánimo de lucro, en las cuales los trabajadores o los usuarios según el caso, son simultáneamente sus aportantes y gestores, creadas con el objeto de producir, distribuir y consumir conjunta y eficientemente, bienes y servicios para satisfacer las necesidades de sus miembros y al desarrollo de obras de servicio a la comunidad en general, observando en su funcionamiento las siguientes características:

1. Estar organizada como empresa que contemple en su objeto social, el ejercicio de una actividad socioeconómica, tendiente a satisfacer necesidades de sus asociados y el desarrollo de obras de servicio comunitario.
2. Tener establecido un vínculo asociativo, fundado en los principios y fines contemplados en la presente ley.
3. Tener incluido en sus estatutos o reglas básicas de funcionamiento la ausencia de ánimo de lucro, movida por la solidaridad, el servicio social o comunitario.
4. Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros sin consideración a sus aportes.
5. Establecer en sus estatutos un monto mínimo de aportes sociales no reducibles, debidamente pagados, durante su existencia.
6. Integrarse social y económicamente, sin perjuicio de sus vínculos con otras entidades sin ánimo de lucro que tengan por fin promover el desarrollo integral del ser humano.

Parágrafo 1º. En todo caso, las organizaciones de la economía solidaria deberán cumplir con los siguientes principios económicos:

1. Establecer la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de liquidación, la del remanente patrimonial.
2. Destinar sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte de los mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su valor real.

Parágrafo 2º. Tienen el carácter de organizaciones solidarias entre otras: cooperativas, los organismos de segundo y tercer grado que agrupen cooperativas u otras formas asociativas y solidarias de propiedad, las instituciones auxiliares de la Economía solidaria, las empresas comunitarias, las empresas solidarias de salud, las precooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutualistas, las empresas de servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas, las empresas asociativas de trabajo y todas aquellas formas asociativas solidarias que cumplan con las características mencionadas en el presente capítulo.

Artículo 7º. Del autocontrol de la Economía Solidaria. Las personas jurídicas, sujetas a la presente ley, estarán sometidas al control social, interno y técnico de sus miembros, mediante las instancias que para el efecto se creen dentro de la respectiva estructura operativa, siguiendo los ordenamientos dispuestos por la ley y los estatutos.

Parágrafo. Para salvaguardar el principio de autogestión, los asociados, durante el proceso de elección de sus dignatarios, procurarán establecer criterios que tengan en cuenta la capacidad y las aptitudes personales, el conocimiento, integridad ética y la destreza de quienes ejercen la representatividad. Las organizaciones de la Economía Solidaria, en sus estatutos, establecerán rigurosos requisitos para el acceso a los órganos de administración, y vigilancia, tomando en cuenta los criterios anteriormente anotados.

Artículo 8º. De la participación de la Economía Solidaria en el desarrollo territorial. Las entidades de la Economía Solidaria deberán realizar las operaciones que sean necesarias y convenientes para dar cumplimiento a su objeto social o extender sus actividades, mediante sistemas de integración vertical y horizontal, estableciendo redes de intercooperación territoriales o nacionales y planes económicos, sociales y culturales de conjunto.

Parágrafo. Los planes económicos, sociales y culturales mencionados, podrán referirse, entre otras actividades, a intercambio o aprovechamiento de servicios, adquisiciones en común, financiamiento de proyectos especiales, impulso de servicios y realización de obras comunes, y todo aquello que tienda a su mayor promoción y desarrollo.

Artículo 9º. De la integración para consolidar la cultura solidaridad en el desarrollo territorial. En el mismo sentido de integración, las entidades de Economía Solidaria deberán hacer planes sociales y de carácter educativo y cultural, mediante la centralización de recursos en organismos de segundo grado o instituciones auxiliares especializadas en educación solidaria, que permitan el cumplimiento de las normas dispuestas en la presente ley, que ayuden a consolidar la cultura solidaria de sus

asociados y contribuyan a la ejecución de programas de índole similar establecidos en los planes territoriales de desarrollo.

Artículo 10. Diseño, debate, ejecución y evaluación de los planes territoriales de desarrollo. Las entidades sujetas de la presente ley podrán participar en el diseño, debate, ejecución y evaluación de los planes territoriales de desarrollo, en especial para introducir en ellos programas que beneficien e impulsen de manera directa la participación y desarrollo de su comunidad coherente y armónico con el desarrollo y crecimiento territorial. En todo caso, en la adopción de planes territoriales y programas específicos de los entes territoriales, que incidan en la actividad de las organizaciones de Economía Solidaria, se podrá tomar en cuenta la opinión de las entidades del sector que se encuentren directamente afectadas.

Artículo 11. Del apoyo de los entes territoriales. Los entes territoriales podrán apoyar, en su radio de acción específico, los programas de desarrollo de la Economía Solidaria. De igual manera podrán establecer lazos de relación con los organismos de segundo y tercer grado e instituciones auxiliares de su ámbito territorial, en procura de establecer programas comunes de desarrollo, contribuir con los programas autónomos de desarrollo del sector o introducir estos en los planes, programas y proyectos de desarrollo territorial. Parágrafo. En todo caso los entes territoriales podrán apoyar los organismos especializados en educación solidaria de su ámbito territorial, en cumplimiento de su objeto social. Así mismo, podrán propiciar la labor que en este sentido realicen las universidades o instituciones de educación superior.

Artículo 12. Las organizaciones de la Economía Solidaria y el desarrollo sostenible. Las personas jurídicas sujetos de la presente ley trabajarán por el desarrollo sostenible de las comunidades de su ámbito territorial, con base en políticas aprobadas por los entes administrativos competentes y consejos territoriales de planeación participativa.

Artículo 13. Prohibiciones. A ninguna persona jurídica sujeto a la presente ley le será permitido:

1. Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas.
2. Establecer con sociedades o personas mercantiles, convenios, combinaciones o acuerdos que hagan participar a éstas, directa o indirectamente, de los beneficios o prerrogativas que las leyes otorguen a las cooperativas y demás formas asociativas y solidarias de propiedad.
3. Conceder ventajas o privilegios a los promotores, empleados, fundadores o preferencias a una porción cualquiera de los aportes sociales.
4. Conceder a sus administradores, en desarrollo de las funciones propias de sus cargos, porcentajes, comisiones, prebendas, ventajas, privilegios o similares que perjudiquen el cumplimiento de su objeto social o afecten a la entidad.
5. Desarrollar actividades distintas a las estipuladas en sus estatutos.
6. Transformarse en sociedad mercantil.

CAPITULO TRES

De la integración de la Economía Solidaria

Artículo 14. Organismos de segundo grado. Las organizaciones de Economía Solidaria podrán asociarse entre sí para el mejor cumplimiento de sus fines económicos, sociales o culturales en organismos de segundo grado de carácter nacional o regional. Aquellos de índole económica serán especializados en determinado ramo o actividad. En dichos organismos podrán participar además otras instituciones de derecho privado sin ánimo de lucro que puedan contribuir o beneficiarse de las actividades de estos.

Parágrafo 1º. Los organismos de segundo grado de carácter nacional requieren, para constituirse de un número mínimo de diez (10) entidades.

Parágrafo 2º. Los organismos de segundo grado de carácter regional requieren para constituirse de un número mínimo de cinco (5) entidades.

Artículo 15. Participación de personas naturales. La autoridad competente, excepcionalmente y cuando las condiciones socioeconómicas lo justifiquen, podrá autorizar la participación en los organismos de segundo grado de carácter económico en calidad de asociados, a personas naturales, con derecho a participar hasta en una tercera parte en los órganos de administración y vigilancia, para garantizar la representación mayoritaria de las personas jurídicas. Los derechos de votación de las personas naturales asociadas se establecerán en los estatutos.

Artículo 16. Organismos de tercer grado. Los organismos de segundo grado que integran cooperativas y otras formas asociativas y solidarias de propiedad, podrán crear organismos de tercer grado, de índole regional, nacional o sectorial, con el propósito de orientar procesos de desarrollo del movimiento y unificar acciones de defensa y representación nacional o internacional. Un organismo de tercer grado solo podrá constituirse con un número no inferior de doce (12) entidades.

Parágrafo. Los organismos de tercer grado existentes, a partir de la vigencia de la presente ley deberán adaptar sus estatutos a los enunciados del presente artículo, indicando con precisión su radio de acción los sectores económicos o las formas asociativas o solidarias que representan.

Artículo 17. Convenios de intercooperación. Las organizaciones de Economía Solidaria podrán también convenir la realización de una o más operaciones en forma conjunta, estableciendo cuál de ellas debe asumir la gestión y responsabilidad ante terceros.

Parágrafo. En ningún caso se podrá establecer convenios para la realización de operaciones que no les estén expresamente autorizadas.

Artículo 18. Aplicación de normas. A los organismos de segundo y tercer grado le serán aplicables en lo pertinente, las normas legales prevista en esta ley.

Artículo 19. De la integración económica. Las entidades de Economía Solidaria podrán constituir, sectorialmente o en conjunto, organismos cooperativos de carácter financiero, de índole regional o nacional, ajustándose a las disposiciones de la presente ley y de las vigentes sobre la materia.

TÍTULO II

ORGANISMOS DE APOYO A LA ECONOMIA SOLIDARIA

CAPITULO PRIMERO

Consejo Nacional de la Economía Solidaria, CONES

Artículo 20. Reestructuración del Consejo Nacional de Economía Solidaria. Reestructúrase el Consejo Nacional de Economía Solidaria *Cones* como el organismo que formula y coordina, a nivel nacional, las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos generales pertinentes al sistema de la Economía Solidaria. El Cones podrá conformar capítulos regionales y locales con funciones similares al nacional, en su ámbito regional.

Artículo 21. Conformación del Consejo Nacional de Economía Solidaria*Cones. El Consejo Nacional de Economía Solidaria *Cones* estará conformado por un representante de cada uno de los componentes del sistema, elegidos democráticamente por el respectivo sector a través de sus órganos de integración, de acuerdo a las normas estatutarias del Cones así:

1. Un representante de cada uno de los organismos de tercer grado y en el caso de la no existencia del órgano de tercer grado de los organismos de segundo grado que agrupen cooperativas, instituciones auxiliares de la Economía Solidaria u otras formas asociativas y solidarias de propiedad.
2. Un representante de los capítulos regionales elegido por los capítulos que se crearán de acuerdo con el reglamento que expida el Cones.
3. El Director del Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, quien asistirá como invitado con voz pero sin voto.

Artículo 22. Funciones del Consejo Nacional de Economía Solidaria-Cones.

1. Fomentar y difundir los principios, valores y fines de la Economía Solidaria.
2. Formular, coordinar, promover la ejecución y evaluación a nivel nacional de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos generales al interior del sistema de la economía solidaria.
3. Integrar los componentes del sistema de la Economía Solidaria.
4. Aprobar sus propios estatutos y reglamentos internos.
5. Nombrar al Secretario Ejecutivo y demás cargos directivos de conformidad con sus estatutos.
6. Participar en los organismos de concertación del desarrollo nacional.
7. Ser órgano consultivo del Gobierno Nacional en la formulación de políticas relativas a la Economía Solidaria.

8. Designar las comisiones técnicas especializadas que sean necesarias.
9. Trazar las políticas en materia de educación solidaria.
10. Las demás que la ley, los estatutos y reglamentos le asignen.

CAPITULO SEGUNDO

Fondo de Fomento de la Economía Solidaria

Artículo 23. Del Fondo de Fomento de la Economía Solidaria-Fones. Créase el Fondo de Fomento de la Economía Solidaria *Fones* con personería jurídica, patrimonio propio y naturaleza solidaria vinculado al Departamento Nacional de la Economía Solidaria y sometido al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Parágrafo. El Gobierno Nacional en ejercicio de su potestad reglamentaria determinará la organización y funcionamiento del Fones.

Artículo 24. Miembros afiliados al Fones. Serán miembros del Fones las entidades de la Economía Solidaria que suscriban aportes según lo determinen los reglamentos.

Parágrafo. La afiliación al Fones será voluntaria y tendrán acceso a sus créditos únicamente las entidades afiliadas.

Artículo 25. Funciones del Fones. Son funciones del Fones.

1. Otorgar créditos para los proyectos de desarrollo de las entidades de Economía Solidaria inscritas.
2. Administrar los recursos a su disposición.
3. Fomentar las organizaciones solidarias de producción y trabajo asociado.
4. Otorgar créditos solidarios para fortalecer las organizaciones de la Economía Solidaria más pequeñas.

Artículo 26. Del patrimonio del Fones. El capital del Fondo de Fomento de la Economía Solidaria. Fones, se constituirá con: aportes privados de sus miembros, del sector solidario y con las apropiaciones que se le asignen en el Presupuesto Nacional según lo determine el Gobierno para lo cual tendrá facultades especiales con el fin de dar cumplimiento a la Constitución Política en sus artículos 58, 333 y concordantes.

Parágrafo. Las organizaciones de la Economía Solidaria podrán destinar una parte de los fondos de educación y solidaridad como aportes o contribuciones al Fones.

Artículo 27. De la Junta Directiva del Fones. La Junta Directiva del Fones estará constituida así:

1. Tres representantes del Gobierno Nacional que serán el Director del Departamento Administrativo de la Economía Solidaria quien lo presidirá, el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, y el Ministro de Desarrollo Económico o su delegado.
2. Un representante del Consejo Nacional de la Economía Solidaria *Cones.
3. Un representante de las entidades de la Economía Solidaria aportantes al Fones.

Parágrafo. La Secretaría técnica estará a cargo del Director del Fones quien asistirá con voz pero sin voto.

Artículo 28. Funciones de la Junta Directiva del Fones. Son funciones de la Junta Directiva, además de las que se determinen en los estatutos, las siguientes:

1. Fijar las políticas generales del Fones, en concordancia con las políticas trazadas por el Consejo Nacional de la Economía Solidaria, Cones.
2. Reglamentar el otorgamiento de crédito y fomento a sus afiliados y definir la clase de garantías admisibles.

TITULO III

ENTIDADES ESTATALES DE PROMOCIÓN, FOMENTO, DESARROLLO Y SUPERVISIÓN

CAPITULO PRIMERO

Reestructuración del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas

Artículo 29. Transformación. A partir de la vigencia de la presente ley, transfórmase el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, el cual se denominará

Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, el cual podrá identificarse también con la sigla Dansocial.

Artículo 30. Objetivos y funciones. El Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria tendrá como objetivos: dirigir y coordinar la política estatal para la promoción, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo empresarial de las organizaciones de la Economía Solidaria, determinadas en la presente ley, y para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Constitución Política de Colombia. Para cumplir con sus objetivos el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, tendrá las siguientes funciones generales:

1. Formular la política del Gobierno Nacional con respecto a las organizaciones de la Economía Solidaria dentro del marco constitucional.
2. Elaborar los planes, programas y proyectos de fomento, desarrollo y protección del Estado con respecto a las organizaciones de la Economía Solidaria y ponerlos a consideración del Departamento Administrativo Nacional de Planeación.
3. Coordinar las políticas, planes y programas estatales para el desarrollo de la Economía Solidaria, entre las diversas entidades del Estado del orden nacional, departamental, distrital o municipal, así como frente a las funciones específicas que dichas instituciones públicas realicen en beneficio de las entidades de la Economía Solidaria y en cumplimiento de sus funciones.
4. Procurar la coordinación y complementación de las políticas, planes, programas y funciones del Estado relacionadas con la promoción, fomento y desarrollo de la Economía Solidaria, con respecto a similares materias que tengan establecidas las entidades de integración y fomento de dicho sector, o las que adelanten otras instituciones privadas nacionales o internacionales, interesadas en el mismo.
5. Coordinar redes intersectoriales, interregionales e interinstitucionales para la promoción, formación, investigación, fomento, protección, fortalecimiento y estímulo del desarrollo empresarial, científico y tecnológico de la Economía Solidaria.
6. Adelantar estudios, investigaciones y llevar estadísticas que permitan el conocimiento de la realidad de las organizaciones de la Economía Solidaria y de su entorno, para el mejor cumplimiento de sus objetivos.
7. Promover la creación y desarrollo de los diversos tipos de entidades de Economía Solidaria, para lo cual podrá prestar la asesoría y asistencia técnica, tanto a las comunidades interesadas en la organización de tales entidades, como a estas mismas.
8. Impulsar y apoyar la acción de los organismos de integración y fomento de las entidades de la Economía Solidaria, con los cuales podrá convenir la ejecución de los programas.
9. Divulgar los principios, valores y doctrina por los cuales se guían las organizaciones de la Economía Solidaria y promover la educación solidaria, así como también la relacionada con la gestión socio-empresarial para este tipo de entidades.
10. Identificar, coordinar e impulsar los recursos a nivel interinstitucional e intersectorial.
11. Organizar los procesos de inducción y educación en la práctica de la Economía Solidaria y expedir certificados de acreditación sobre educación en teoría y práctica de Economía Solidaria.

Artículo 31. Asunción de obligaciones y funciones transitorias. El Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, asumirá las obligaciones del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, siempre y cuando correspondan a sus propias funciones.

Así mismo desempeñará las funciones de control, inspección y vigilancia, hasta tanto se organice la nueva Superintendencia de la Economía Solidaria, organismo que de forma inmediata las asumirá.

Artículo 32. Estructura. Para desarrollar y cumplir sus funciones, el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria tendrá la siguiente estructura:

1. Despacho del Director.
 - a) Oficina Jurídica;
 - b) Oficina de Control Interno;
 - c) Oficina de Comunicaciones y Divulgación;
 - d) Oficina de Sistemas y Estadística.
2. Despacho del Subdirector.
 - a) Unidad de educación y formación;
 - b) Unidad de investigación socio-económica;
 - c) Unidad de Planeación y Evaluación;
 - d) Unidad de Promoción y Fomento.
3. Secretaría General.
 - a) Unidad de Recursos Humanos;
 - b) Unidad Administrativa y Financiera.

El Gobierno Nacional, atendiendo a los principios constitucionales de la función pública y, en cumplimiento de los objetivos y finalidades del Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, desarrollará la nueva estructura y asignará las funciones de las distintas dependencias, pudiendo reordenar las dispuestas en este artículo o crear nuevas. El ejercicio de estas facultades se desarrollará de tal forma que de acuerdo con las políticas de descentralización, se fortalezca y amplíe la labor de fomento y promoción, en todo el territorio nacional.

CAPITULO SEGUNDO

Superintendencia de la Economía Solidaria

Artículo 33. Creación y naturaleza jurídica. Créase la Superintendencia de la Economía Solidaria como un organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera.

Artículo 34. Entidades sujetas a su acción. El Presidente de la República ejercerá por conducto de la Superintendencia de la Economía Solidaria la inspección, vigilancia y control de las organizaciones de la Economía Solidaria que no se encuentren sometidas a la supervisión especializada del Estado. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito, las funciones serán asumidas por esta Superintendencia, mediante el establecimiento de una delegatura especializada en supervisión financiera, la cual recibirá asistencia tecnológica, asesoría técnica y formación del recurso humano de la Superintendencia Bancaria.

Artículo 35. Objetivos y finalidades. La Superintendencia de la Economía Solidaria, en su carácter de autoridad técnica de supervisión desarrollará su gestión con los siguientes objetivos y finalidades generales:

1. Ejercer el control, inspección y vigilancia sobre las entidades que cobija su acción para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y de las normas contenidas en sus propios estatutos.
2. Proteger los intereses de los asociados de las organizaciones de Economía Solidaria, de los terceros y de la comunidad en general.
3. Velar por la preservación de la naturaleza jurídica de las entidades sometidas a su supervisión, en orden a hacer prevalecer sus valores, principios y características esenciales.
4. Vigilar la correcta aplicación de los recursos de estas entidades, así como la debida utilización de las ventajas normativas a ellas otorgadas.
5. Supervisar el cumplimiento del propósito socioeconómico no lucrativo que ha de guiar la organización y funcionamiento de las entidades vigiladas.

Artículo 36. Funciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Son facultades de la Superintendencia de la Economía Solidaria para el logro de sus objetivos:

1. Verificar la observancia de las disposiciones que sobre estados financieros dicte el Gobierno Nacional.
2. Establecer el régimen de reportes socioeconómicos periódicos u ocasionales que las entidades sometidas a su supervisión deben presentarle, así como solicitar a las mismas, a sus administradores, representantes legales o revisores fiscales, cuando resulte necesario, cualquier información de naturaleza jurídica, administrativa, contable o financiera sobre el desarrollo de sus actividades.
3. Fijar las reglas de contabilidad a que deben sujetarse las entidades bajo su supervisión, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales que regulen la materia.
4. Realizar, de oficio o a solicitud de parte interesada, visitas de inspección a las entidades sometidas a supervisión, examinar sus archivos, determinar su situación socioeconómica y ordenar que se tomen las medidas a que haya lugar para subsanar las irregularidades observadas en desarrollo de las mismas. Los informes de visitas serán trasladados a las entidades vigiladas. En cuanto fuere necesario para verificar hechos o situaciones relacionados con el funcionamiento de las entidades supervisadas, las visitas podrán extenderse a personas no vigiladas.
5. Interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio se requiera para el esclarecimiento de hechos relacionados con la administración, con la fiscalización o, en general con el funcionamiento de las entidades sometidas a su supervisión. En desarrollo de esta atribución podrá exigir la comparecencia de la persona requerida, haciendo uso de las medidas coercitivas que se consagran para estos efectos en el Código de Procedimiento Civil.
6. Imponer sanciones administrativas personales. Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que haya lugar, cuando cualquier director, gerente, revisor, fiscal u otro funcionario o empleado de una entidad sujeta a la vigilancia del Superintendente de la Economía Solidaria autorice o ejecute actos violatorios del estatuto de la entidad, de alguna ley o

reglamento, o de cualquier norma legal a que el establecimiento deba sujetarse, el Superintendente de la Economía Solidaria podrá sancionarlo, por cada vez, con una multa hasta de doscientos (200) salarios mínimos a favor del Tesoro Nacional. El Superintendente de la Economía Solidaria podrá, además, exigir la remoción inmediata del infractor y comunicará esta determinación a todas las entidades vigiladas.

Las multas previstas en este artículo, podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento de la norma y se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 1º, 2º y 3º del artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

7. Imponer sanciones administrativas institucionales. Cuando el Superintendente de la Economía Solidaria, después de pedir explicaciones a los administradores o a los representantes legales de cualquier institución sometida a su vigilancia, se cerciore de que estos han violado una norma de su estatuto o reglamento, o cualquiera otra legal a que deba estar sometido, impondrá al establecimiento, por cada vez, una multa a favor del Tesoro Nacional de hasta doscientos (200) salarios mínimos, graduándola a su juicio, según la gravedad de la infracción o el beneficio pecuniario obtenido, o según ambos factores.

Las multas previstas en este numeral podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento de la norma y se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 1º, 2º y 3º del artículo 208 del presente estatuto.

8. Ordenar la remoción de directivos, administradores, miembros de juntas de vigilancia, representantes legales, revisor fiscal y funcionarios o empleados de las organizaciones solidarias sometidas a su supervisión cuando se presenten irregularidades que así lo ameriten.

9. Decretar la disolución de cualquiera de sus entidades vigiladas, por las causales previstas en la ley y en los estatutos.

10. Realizar los actos de registro e inscripción previstos en el artículo 63 de la presente ley.

11. Ordenar la cancelación de la inscripción en el correspondiente registro del documento de constitución de una entidad sometida a su control, inspección y vigilancia o la inscripción que se haya efectuado de los nombramientos de sus órganos de administración, vigilancia, representantes legales y revisores fiscales, en caso de advertir que la información presentada para su inscripción no se ajusta a las normas legales o estatutarias. La cancelación de la inscripción del documento de constitución conlleva la pérdida de la personería jurídica, y a ella se procederá siempre que el defecto no sea subsanable, o cuando siéndolo ha transcurrido el plazo prudencial otorgado para su corrección.

12. Ordenar las modificaciones de las reformas estatutarias adoptadas por las entidades sometidas a su control, inspección y vigilancia, cuando se aparten de la ley.

13. Disponer las acciones necesarias para obtener el pago oportuno de las contribuciones a cargo de las entidades sometidas a su control, inspección y vigilancia.

14. Dar trámite a las reclamaciones o quejas que se presenten contra las entidades supervisadas, por parte de quienes acrediten un interés legítimo con el fin de establecer eventuales responsabilidades administrativas y ordenar las medidas que resulten pertinentes.

15. Absolver las consultas que se formulen en asuntos de su competencia.

16. Desarrollar acciones que faciliten a las entidades sometidas a su supervisión el conocimiento sobre su régimen jurídico.

17. Asesorar al Gobierno Nacional en lo relacionado con las materias que se refieran al ejercicio de sus funciones.

18. Fijar el monto de las contribuciones que las entidades supervisadas deben pagar a la Superintendencia para atender sus gastos de funcionamiento en porcentajes proporcionales.

19. Definir internamente el nivel de supervisión que debe aplicarse a cada entidad y comunicarlo a ésta en el momento en que resulte procedente, y

20. Convocar de oficio o a petición de parte a reuniones de Asamblea General en los siguientes casos:

a) Cuando no se hubieren cumplido los procedimientos a que se refiere el artículo 30 de la Ley 79 de 1988;

b) Cuando se hubieren cometido irregularidades graves en la administración que deban ser conocidas o subsanadas por el máximo órgano social.

21. Autorizar la fusión, transformación, incorporación y escisión de las entidades de la Economía Solidaria sometidas a su supervisión, sin perjuicio de las atribuciones de autorización o aprobación que respecto a estas operaciones corresponda ejercer a otras autoridades atendiendo las normas especiales.

22. Instruir a las instituciones vigiladas sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones que rigen su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación.

23. Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control en relación con las entidades cooperativas de ahorro y crédito y las multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito en los mismos términos, con las mismas facultades y siguiendo los mismos procedimientos que desarrolla la Superintendencia Bancaria con respecto a los establecimientos de crédito, incluyendo dentro de ellas, las atribuciones relacionadas con institutos de salvamento y toma de posesión para administrar o liquidar".
24. En todo caso, tales procedimientos se establecerán con base en metodologías adaptadas a la naturaleza cooperativa.
25. Las demás que le asigne la ley.

Parágrafo 1º. El Gobierno Nacional podrá determinar niveles de supervisión para el ejercicio de las funciones aquí previstas.

Parágrafo 2º. En desarrollo de sus facultades de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia de la Economía Solidaria podrá apoyarse parcialmente, para la obtención de colaboración técnica, en organismos de integración de las entidades de Economía Solidaria, en instituciones auxiliares de la Economía Solidaria o en firmas especializadas.

Artículo 37. Tasa de contribución. Los gastos necesarios para el manejo de la Superintendencia de la Economía Solidaria serán pagados hasta en un cincuenta por ciento (50%) de la contribución impuesta con tal fin a las entidades vigiladas y se exigirá por el Superintendente, con la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para estos efectos, el Superintendente de la Economía Solidaria deberá, el 1º de febrero y el 1º de agosto de cada año, o antes, exigir a las entidades mencionadas el pago de la contribución. El manejo y administración de estos recursos estará a cargo de la Superintendencia de la Economía Solidaria. El monto de la contribución impuesta a las entidades vigiladas, deberá guardar equitativa proporción con sus respectivos activos.

Artículo 38. Criterios para su fijación. El Superintendente de la Economía Solidaria fijará y distribuirá la contribución a cargo de las entidades sujetas a su inspección, control y vigilancia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. El costo total de la contribución se distribuirá entre los distintos grupos de entidades según su actividad económica y nivel de supervisión con el fin de que la contribución se pague en proporción al gasto que le implique al Estado el ejercicio del control, inspección y vigilancia de cada grupo de entidades.
2. El costo de contribución para cada entidad será hasta del dos (2) por mil (1.000) sobre sus activos totales, de acuerdo con los estados financieros al corte del año inmediatamente anterior.
3. Cuando una organización de economía solidaria no suministre oportunamente los balances cortados a 31 de diciembre del año anterior o no liquide la contribución respectiva, la Superintendencia la liquidará aplicando a la contribución del período anterior un incremento correspondiente al promedio de la tasa de crecimiento de los activos totales de las entidades del sector con un ajuste adicional del cinco por ciento (5%).
4. Cuando la entidad no hubiere estado sometida a inspección, vigilancia y control durante todo el período considerado para establecer la contribución ésta se liquidará en proporción al lapso durante el cual se haya practicado la supervisión.

Parágrafo. Cuando las organizaciones de la economía solidaria presenten un total de activos inferior a los cien millones de pesos (\$100.000.000), la Superintendencia de la Economía Solidaria se abstendrá de hacer el cobro, respectivo. El valor absoluto indicado se ajustará anual y acumulativamente a partir de 1999, mediante la aplicación de la variación del índice de precios al consumidor, total ponderado, que calcule el DANE.

TITULO IV

NORMAS SOBRE LA ACTIVIDAD FINANCIERA

CAPITULO I

Condiciones para el ejercicio de la actividad financiera

Artículo 39. Actividad financiera y aseguradora. El artículo 99 de la Ley 79 de 1988 quedará así: La actividad financiera del cooperativismo se ejercerá siempre en forma especializada por las instituciones financieras de naturaleza cooperativa, las cooperativas financieras, y las cooperativas de ahorro y crédito, con sujeción a las normas que regulan dicha actividad para cada uno de estos tipos de entidades, previa autorización del organismo encargado de su control.

Las cooperativas multiactivas o integrales podrán adelantar la actividad financiera, exclusivamente con sus asociados mediante secciones especializadas, bajo

circunstancias especiales y cuando las condiciones sociales y económicas lo justifiquen, previa autorización del organismo encargado de su control.

La actividad aseguradora del cooperativismo se ejercerá siempre en forma especializada por las cooperativas de seguros y los organismos cooperativos de segundo grado e instituciones auxiliares del cooperativismo de seguros.

Para efectos de la presente ley se entenderá como actividad financiera la captación de depósitos, a la vista o a término de asociados o de terceros para colocarlos nuevamente a través de préstamos, descuentos, anticipos u otras operaciones activas de crédito y, en general, el aprovechamiento o inversión de los recursos captados de los asociados o de terceros. Solamente las cooperativas financieras podrán prestar sus servicios a terceros no asociados.

Parágrafo. En concordancia con las previsiones del artículo 335 de la Constitución Política, la Superintendencia encargada de la vigilancia de la entidad infractora, adelantará las medidas cautelares establecidas en el numeral 1º del artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero respecto de las entidades que adelanten actividad financiera sin haber recibido la autorización pertinente, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 3º del artículo 208 del mismo ordenamiento.

Artículo 40. Cooperativas financieras. Son cooperativas financieras los organismos cooperativos especializados cuya función principal consiste en adelantar actividad financiera, su naturaleza jurídica se rige por las disposiciones de la Ley 79 de 1988 y se encuentran sometidas al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. Estas cooperativas son establecimientos de crédito.

Para adelantar las operaciones propias de las cooperativas financieras, se requiere la autorización previa y expresa en tal sentido de la Superintendencia Bancaria, entidad que la impartirá únicamente previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Demostrar ante la Superintendencia Bancaria experiencia no menor de tres (3) años en el ejercicio de la actividad financiera con asociados como cooperativa de ahorro y crédito o multiactiva o integral con sección de ahorro y crédito, en una forma ajustada a las disposiciones legales y estatutarias.

b) Acreditar el monto de aportes sociales mínimos que se exija para este tipo de entidad.

La Superintendencia Bancaria se cerciorará, por cualesquiera investigaciones que estime pertinentes de la solvencia patrimonial de la entidad, de su idoneidad y de la de sus administradores.

Parágrafo. La Superintendencia Bancaria podrá establecer planes de ajuste para la conversión en cooperativas financieras de las cooperativas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren sometidas a su vigilancia.

Artículo 41. Cooperativas de ahorro y crédito. Son cooperativas de ahorro y crédito los organismos cooperativos especializados cuya función principal consiste en adelantar actividad financiera exclusivamente con sus asociados, su naturaleza jurídica se rige por las disposiciones de la Ley 79 de 1988 y se encuentran sometidas al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Para adelantar las operaciones propias de las cooperativas de ahorro y crédito, se requiere la autorización previa y expresa en tal sentido de la Superintendencia de la Economía Solidaria, entidad que la impartirá únicamente cuando acrediten el monto de aportes sociales mínimos que se exija para este tipo de entidad.

La Superintendencia de la Economía Solidaria se cerciorará, por cualesquiera investigaciones que estime pertinentes de la solvencia patrimonial de la entidad de su idoneidad y de la de sus administradores.

Parágrafo 1º. El Gobierno Nacional podrá establecer la obligación para las cooperativas de ahorro y crédito de mantener un fondo de liquidez en entidades segundo grado de la economía solidaria que desarrollen actividad financiera, y determinar sus características, modalidades y sanciones.

Parágrafo 2º. Las cooperativas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, podrán optar por la transformación en cooperativas de ahorro y crédito dentro del año siguiente a esa fecha. En consecuencia si es del caso, deberán dar aviso a la Superintendencia Bancaria para fijar un plan de ajuste que permita ajustarse a la relación establecidas en el artículo 43 de la presente ley.

Este mecanismo también podrá ser ordenado por la Superintendencia Bancaria como medida de salvamento aplicable a cooperativas financieras.

Artículo 42. Aportes sociales mínimos. Las cooperativas financieras deben acreditar y mantener un monto mínimo de aportes sociales pagados equivalente a una suma no inferior a mil quinientos millones de pesos (\$1.500.000.000).

Las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas e integrales con secciones de ahorro y crédito, deberán acreditar y mantener un monto mínimo de aportes sociales pagados no inferior a quinientos millones de pesos (\$500 millones).

El Gobierno Nacional podrá establecer montos mínimos inferiores a los señalados en este artículo, teniendo en cuenta el vínculo de asociación, y la insuficiencia de servicios financieros en el área geográfica de influencia. En todo caso, el ejercicio de esta facultad deberá responder a la fijación de criterios generales aplicados a las cooperativas que se ajusten a ellos.

Parágrafo 1º. En concordancia con lo dispuesto en la Ley 79 de 1988 deberá establecerse en los estatutos que los aportes sociales no podrán reducirse respecto de los valores previstos en el presente artículo.

Parágrafo 2º. Las cooperativas que adelanten actividad financiera en los términos de la presente ley, se abstendrán de devolver aportes cuando ellos sean necesarios para el cumplimiento de los límites previstos en el presente artículo así como de los establecidos en las normas sobre, margen de solvencia.

Parágrafo 3º. El monto mínimo de capital previsto por este artículo deberá ser cumplido de manera permanente por las entidades en funcionamiento.

Parágrafo 4º. Los valores absolutos indicados en este artículo se ajustarán anual y acumulativamente a partir de 1999, mediante la aplicación de la variación del índice de precios al consumidor, total ponderado, que calcula el DANE.

Artículo 43. Conversión. Las cooperativas de ahorro y crédito estarán obligadas a solicitar autorización para su conversión en cooperativas financieras, cuando durante dos (2) meses consecutivos la proporción del total de captaciones respecto a sus pasivos alcance o supere, el cincuenta y uno por ciento (51%).

En todo caso, las cooperativas que se encuentren en esta situación, deberán informar inmediatamente, del hecho a la Superintendencia de la Economía Solidaria, presentar dentro del mes siguiente el plan de ajuste, para el cumplimiento de los requisitos establecidos para la conversión en cooperativas financieras. El procedimiento a seguir será el establecido para la conversión de establecimientos de crédito. Si la entidad cuenta con un sistema de autocontrol, el organismo correspondiente deberá informar en el momento en que tenga conocimiento del hecho.

En caso de que la Superintendencia Bancaria no autorice la conversión, la cooperativa deberá ajustarse a la mayor brevedad posible la relación fijada en este artículo y, en todo caso, dentro del plazo que señale la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Parágrafo 1º. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a las cooperativas intervenidas o que se encuentren en causal de disolución.

Parágrafo 2º. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo dará lugar a sanciones y multas por parte del organismo de control. Las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento de la norma.

Artículo 44. Especialización. Las cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito deberán especializarse para el ejercicio de la actividad financiera cuando durante más de dos (2) meses consecutivos, el monto total del patrimonio de la cooperativa multiplicado por la proporción que represente el total de depósitos de asociados respecto al total de activos de la entidad, arroje un monto igual o superior al necesario para convertirse en cooperativa financiera en los términos previstos en el artículo 42 de la presente ley.

En todo caso, las cooperativas que se encuentren en esta situación, deberán informar inmediatamente del hecho a la Superintendencia de la Economía Solidaria y presentar dentro del mes siguiente el plan de ajuste para el cumplimiento de los requisitos necesarios para constituirse como cooperativas financieras ante la Superintendencia Bancaria. Una vez autorizada la conversión o especialización en algunas de las alternativas que se señalan en el artículo siguiente, el plan de ajuste deberá cumplirse dentro del plazo que se acuerde con la Superintendencia Bancaria. El organismo de autocontrol correspondiente y las entidades de integración que desarrollen programas de autocontrol también deberán informar en el momento en que tengan conocimiento del hecho.

En caso de que la Superintendencia Bancaria no autorice la especialización, la cooperativa deberá ajustarse a la mayor brevedad posible al límite de captaciones fijado en este artículo y, en todo caso, dentro del plazo que señale la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Parágrafo 1º. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a las cooperativas intervenidas o que se encuentren en causal de disolución.

Parágrafo 2º. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo dará lugar a sanciones y multas por parte del organismo de control. Las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento de la norma.

Artículo 45. Alternativas para la especialización de las cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito. Las cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito podrán especializarse para el ejercicio de la actividad financiera mediante una de las siguientes modalidades:

1. Escisión, preferentemente para conformar otra entidad de naturaleza solidaria, en la forma y condiciones previstas para las sociedades comerciales.
2. Transferencia, mediante cesión, de la totalidad de activos y pasivos de la correspondiente sección de ahorro y crédito a una cooperativa de ahorro y crédito o a un establecimiento de crédito.
3. Creación de una o varias instituciones auxiliares del cooperativismo, la(s) cual(es) tendrá(n) como objetivo la prestación de los servicios no financieros de la cooperativa multiactiva o integral, quedando ésta, en adelante, especializada en la actividad financiera.

Artículo 46. Excepciones a la conversión y especialización. No estarán obligadas a convertirse ni a especializarse las cooperativas de ahorro y crédito y las multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito que estén integradas por asociados que se encuentren o hayan estado vinculados laboralmente a una misma entidad pública o privada.

Artículo 47. Operaciones autorizadas a las cooperativas financieras. Las cooperativas financieras están autorizadas para, adelantar únicamente las siguientes operaciones:

1. Captar ahorro a través de depósitos a la vista o a término mediante expedición de Certificados de Depósito de Ahorro a Término (CDAT), y Certificados de Depósito a Término (CDT).
2. Captar recursos a través de ahorro contractual.
3. Negociar títulos emitidos por terceros distintos de sus gerentes, directores y empleados.
4. Otorgar préstamos y, en general, celebrar operaciones activas de crédito.
5. Celebrar contratos de apertura de crédito.
6. Comprar y vender títulos representativos de obligaciones emitidas por entidades de derecho público de cualquier orden.
7. Otorgar financiación mediante la aceptación de letras de cambio.
8. Otorgar avales y garantías en términos que para el efecto autoricen la Junta Directiva del Banco de la República o el Gobierno Nacional, cada uno según sus facultades.
9. Efectuar operaciones de compra de cartera o factoring sobre toda clase de títulos.
10. Abrir cartas de crédito sobre el interior en moneda legal.
11. Intermediar recursos de redescuento.
12. Realizar operaciones de compra y venta de divisas y demás operaciones de cambio, dentro, de las condiciones y regulaciones que al efecto expida la Junta Directiva del Banco de la República.
13. Emitir bonos.
14. Prestar servicios de asistencia técnica, educación, capacitación y solidaridad que en desarrollo de las actividades previstas en los estatutos o por disposición de la ley cooperativa pueden desarrollar, directamente o mediante convenios con otras entidades. En todo caso, en la prestación de tales servicios las cooperativas no pueden utilizar recursos provenientes de los depósitos de ahorro y demás recursos captados en la actividad financiera.
15. Celebrar convenios dentro de las disposiciones legales para la prestación de otros servicios, especialmente aquellos celebrados con los establecimientos bancarios para el uso de cuentas corrientes.
16. Las que autorice el Gobierno Nacional.

Artículo 48. Inversiones autorizadas a las cooperativas financieras. Las cooperativas financieras sólo podrán invertir en:

1. Entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, por la Superintendencia Bancaria o por otros entes estatales, diferentes de cooperativas financieras.
2. En el Fondo de Fomento de la Economía Solidaria, Fones.
3. Entidades de servicios financieros o de servicios técnicos o administrativos, con sujeción a las reglas establecidas en el estatuto orgánico del sistema financiero.
4. En sociedades diferentes a las entidades de naturaleza cooperativa, a condición de que la asociación sea conveniente para el cumplimiento de su objeto social, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 79 de 1988 y hasta por el diez por ciento (10%) de su capital y reservas patrimoniales.
5. En bienes muebles e inmuebles con sujeción a lo establecido para los demás establecimientos de crédito.

Parágrafo 1º. La totalidad de las inversiones de capital de las cooperativas financieras, no podrá superar el cien por ciento (100%) de sus aportes sociales y reservas patrimoniales. En todo caso, con estas inversiones las cooperativas no deben desvirtuar su propósito de servicio ni el carácter no lucrativo de su actividad; si no existiere este propósito, la entidad deberá enajenar la respectiva inversión.

Parágrafo 2º. Las cooperativas financieras no podrán realizar aportes de capital en sus entidades socias.

Artículo 49. Operaciones autorizadas a las cooperativas de ahorro y crédito y a las secciones de ahorro y crédito de las cooperativas multiactivas o integrales. Las cooperativas de ahorro y crédito y las secciones de ahorro y crédito de las cooperativas multiactivas o integrales están autorizadas para adelantar únicamente las siguientes operaciones:

1. Captar ahorro a través de depósitos a la vista, a término, mediante la expedición de CDAT o contractual.
2. Otorgar créditos.
3. Negociar títulos emitidos por terceros distintos a sus gerentes, directores y empleados.
4. Celebrar contratos de apertura de crédito.
5. Comprar y vender títulos representativos de obligaciones emitidas por entidades de derecho público de cualquier orden.
6. Efectuar operaciones de compra de cartera o factoring sobre toda clase de títulos.
7. Emitir bonos.
8. Prestar servicios de asistencia técnica, educación, capacitación y solidaridad que en desarrollo de las actividades previstas en los estatutos o por disposición de la ley cooperativa pueden desarrollar, directamente o mediante convenios con otras entidades. En todo caso, en la prestación de tales servicios las cooperativas no pueden utilizar recursos provenientes de los depósitos de ahorro y demás recursos captados en la actividad financiera.
9. Celebrar convenios dentro de las disposiciones legales para la prestación de otros servicios, especialmente aquellos celebrados con los establecimientos bancarios para el uso de cuentas corrientes.
10. Las que autorice el Gobierno Nacional.

Artículo 50. Inversiones autorizadas a las cooperativas de ahorro y crédito y a las secciones de ahorro y crédito de las cooperativas multiactivas o integrales. Las cooperativas de ahorro y crédito y las secciones de ahorro y crédito de las Cooperativas multiactivas o integrales sólo podrán invertir en:

1. Entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, por la Superintendencia Bancaria o por otros entes estatales, diferentes de cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito.
2. Entidades de servicios financieros o de servicios técnicos o administrativos, con sujeción a las reglas establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
3. En sociedades, diferentes a entidades de naturaleza cooperativa, a condición de que la asociación sea conveniente para el cumplimiento de su objeto social, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 79 de 1988 y hasta por el diez por ciento (10%) de su capital y reservas patrimoniales.
4. En bienes muebles e inmuebles con sujeción a lo establecido para los establecimientos de crédito.

Parágrafo 1º. La totalidad de las inversiones de capital de las cooperativas de ahorro y crédito y de las secciones de ahorro y crédito de las cooperativas multiactivas o integrales, no podrán superar el cien por ciento (100%) de sus aportes sociales y reservas patrimoniales. En todo caso, con estas inversiones las cooperativas no deben desvirtuar

su propósito de servicio ni el carácter no lucrativo de su actividad, si no existiere este propósito, la entidad deberá enajenar la respectiva inversión.

Parágrafo 2º. Las cooperativas de ahorro y crédito y las secciones de ahorro y crédito de las cooperativas multiactivas o integrales no podrán realizar aportes de capital en sus entidades socias.

CAPITULO II

Disposiciones especiales

Artículo 51. Fondo de garantías. Facúltase al Gobierno Nacional para que establezca, en un término no superior a seis (6) meses contados a partir de la fecha de la promulgación de esta ley, los términos y modalidades de acceso de las cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito, a un fondo de garantías, defina su naturaleza, los mecanismos de apoyo a las entidades mencionadas en dificultades, determine sistemas especiales de contratación, vinculación de personal y de inversión de sus recursos, indique los mecanismos de financiación a cargo de las entidades inscritas, sus objetivos concretos y funciones, regule el seguro de depósitos, determine montos de cobertura y establezca la formación de reservas separadas para atender los distintos riesgos.

En caso de que se decida crear un fondo para las cooperativas financieras, las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito, el Fondo tendrá las siguientes prerrogativas:

1. Prerrogativas Tributarias. Para el conveniente y eficaz logro de sus objetivos, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras gozará de las siguientes prerrogativas:

a) Para todos los efectos tributarios, el Fondo será considerado como entidad sin ánimo de lucro;

b) Exención de impuesto de timbre, registro y anotación e impuestos nacionales, diferentes del impuesto sobre las ventas, según lo establece el artículo 482 del Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario), no cedidos a entidades territoriales, y c) Exención de inversiones forzosas.

2. Pago de acreencias en liquidaciones. El pago de las obligaciones a favor del Fondo de Garantías y de las obligaciones en moneda extranjera derivadas de depósitos constituidos por dicha entidad en los establecimientos de crédito, gozarán del derecho de ser excluidos de la masa de la liquidación de instituciones financieras y del Fondo.

3. Reserva de información. El Fondo de Garantías estará obligado a guardar reserva sobre las informaciones que exija a las instituciones inscritas, salvo los casos previstos en la Constitución y la ley. En general, el Fondo gozará de reserva sobre sus papeles, libros y correspondencia.

Parágrafo 1º. En desarrollo de las facultades el Gobierno podrá determinar, conforme a sus análisis técnicos, económicos y financieros, si para tales efectos resulta necesaria la creación de un Fondo de Garantías para el sector cooperativo o si puede ser aprovechada la infraestructura del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, con los ajustes y modificaciones a que haya lugar.

Parágrafo 2º. En ejercicio de las facultades que se prevén en el presente artículo, el Gobierno Nacional podrá establecer mecanismos de financiación del seguro de depósitos a cargo de las entidades inscritas. En todo caso el monto de las primas será proporcional al de los activos de la respectiva entidad.

Parágrafo 3º. No obstante la calidad de establecimientos de crédito de las cooperativas financieras, estas entidades deberán inscribirse en el Fondo de Garantías previsto en el presente artículo.

Artículo 52. Organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero. A los organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero actualmente existentes les serán aplicables las normas contenidas en la presente ley para las cooperativas financieras, siempre y cuando acrediten los aportes sociales mínimos exigidos a dichas entidades en el artículo 42 de la presente ley, y sin perjuicio de la facultad que les otorga el parágrafo del artículo 98 de la Ley 79 de 1988.

Artículo 53. Intervención del Gobierno. Las normas de intervención y regulación que adopte el Gobierno Nacional en desarrollo de sus facultades legales, deberán tener en cuenta la naturaleza especial de esta clase de entidades con el fin de facilitar la aplicación de los principios cooperativos, proteger y promover el desarrollo de las instituciones de la economía solidaria y, especialmente, promover y extender el crédito social.

Artículo 54. Modificación del artículo 20 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. El inciso 1º del numeral 1º del artículo 2º del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero quedará así: "Los establecimientos de crédito comprenden las siguientes clases de instituciones financieras: establecimientos bancarios, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial y cooperativas financieras".

Artículo 55. Modificación del artículo 213 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. El artículo 213 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero quedará así. "Serán aplicables a las corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial, cooperativas financieras y sociedades de servicios financieros, las normas que regulan los establecimientos bancarios, en todo lo que no resulte contrario a sus disposiciones especiales".

Artículo 56. Adecuación de la estructura de la Superintendencia Bancaria. El Gobierno Nacional, en desarrollo de sus facultades constitucionales, adecuará la estructura de la Superintendencia Bancaria para la asunción de las funciones que se derivan de la presente ley con respecto a la inspección, control y vigilancia de las cooperativas financieras y de las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito.

Artículo 57. Vigencia y derogatorias. El presente capítulo rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Sustitúyase el título del Capítulo VI de la Parte Primera del Tomo I del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero por "Cooperativas Financieras". Incorpórense el artículo 37 de la presente ley como numeral 6 del artículo 2º del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; el actual numeral 6, incorpórese como numeral 7 de la misma disposición. Incorpórense las demás reglas del presente capítulo como capítulo VI de la Parte Primera del Tomo I, bajo el título de "Cooperativas Financieras" y suprimase el capítulo VI de la Parte Cuarta.

TITULO V

DISPOSICIONES VARIAS

CAPITULO UNICO

Artículo 58. Normas aplicables a las entidades de la Economía Solidaria. Serán aplicables a las entidades de naturaleza solidaria las disposiciones legales y reglamentarias establecidas en la Ley 79 de 1988 para las cooperativas, en lo no previsto en la presente ley.

Artículo 59. Funciones de las Juntas de Vigilancia. Las funciones señaladas por la ley a este órgano deberán desarrollarse con fundamento en criterios de investigación y valoración y sus observaciones o requerimientos serán documentados debidamente. Los miembros de este órgano responderán personal y solidariamente por el incumplimiento de las obligaciones que les imponen la ley y los estatutos. El ejercicio de las funciones asignadas por la ley a las Juntas de Vigilancia se referirá únicamente al control social y no deberá desarrollarse sobre materias que correspondan a las de competencia de los órganos de administración

Artículo 60. Incompatibilidades de los miembros de Juntas de Vigilancia y Consejos de Administración. Los miembros de las Juntas de Vigilancia no podrán ser simultáneamente miembros del Consejo de Administración de la misma cooperativa, ni llevar asuntos de la entidad en calidad de empleado o de asesor. Los miembros del Consejo de Administración no podrán celebrar contratos de prestación de servicios o de asesoría con la entidad. Parágrafo 1º. Los cónyuges, compañeros permanentes, y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad y primero civil de los miembros de la Junta de Vigilancia, del consejo de administración, del representante legal o del secretario general de una cooperativa tampoco, podrán celebrar contratos de prestación de servicios o de asesoría con esa cooperativa. Parágrafo 2º. Lo dispuesto en el primer inciso de este artículo no rige para las cooperativas de trabajo asociado.

Artículo 61. Créditos a asociados miembros de Consejos de Administración o Juntas de Vigilancia. La aprobación de los créditos en entidades de naturaleza cooperativa que soliciten los miembros de sus respectivos consejos directivos y juntas de vigilancia o las personas jurídicas de las cuales estos sean administradores,

corresponderá al órgano, comité o estamento que de conformidad con los estatutos y reglamentos de cada institución sea competente para el efecto.

Serán personal y administrativamente responsables los miembros de dichos estamentos que otorguen créditos en condiciones que incumplan las disposiciones legales y estatutarias sobre la materia.

Parágrafo. Las solicitudes de crédito de los representantes legales deberán ser sometidas a la aprobación de los consejos de administración, cuyos miembros serán responsables por el otorgamiento de créditos en condiciones que incumplan las disposiciones legales y estatutarias sobre la materia.

Artículo 62. Inspección, vigilancia y control de los fondos mutuos de inversión. A partir de la vigencia, de la presente ley, los fondos mutuos de inversión quedarán sujetos a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de Valores. Para este efecto, el Gobierno Nacional, en ejercicio de sus facultades constitucionales podrá reestructurar su planta de personal.

Artículo 63. Registro e inscripción. Los actos de registro e inscripción de las entidades de la economía solidaria a que se refiere la presente ley, serán realizados por la Superintendencia a la cual corresponda su supervisión. Para el registro de acto de constitución, será condición previa la presentación del certificado de acreditación sobre educación solidaria expedido por el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria.

Parágrafo 1º. En todo caso, estos actos no suplirán el requisito de autorización previa necesario para el ejercicio de determinadas actividades cuando la ley establezca esta obligación. Las organizaciones de la Economía Solidaria que ejerzan actividades sin la debida autorización serán acreedores a las sanciones a que haya lugar.

Parágrafo 2º. Las cooperativas cuyo objeto principal sea la prestación de servicios de vigilancia privada y las que tengan por finalidad ser promotoras de salud o prestadoras de servicios de salud, se regirán para efecto de la obtención de personalidad jurídica, por las disposiciones establecidas para las entidades de naturaleza cooperativa.

Artículo 64. Supresión de cargos. La supresión de cargos del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas a que haya lugar como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en la presente ley, se regirá por las normas de la Ley 27 de 1992 y por las disposiciones que la adicionen, modifiquen o reformen. Tendrán prelación en igualdad de condiciones, los funcionarios del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en la vinculación a la planta de personal de las nuevas entidades creadas por la presente ley.

Parágrafo. Los funcionarios que se hayan acogido a algún plan de retiro voluntario no podrán ser reubicados en las entidades de que se ocupa la presente ley. En todo caso, no serán procedentes las acciones jurídicas encaminadas a obtener indemnizaciones por la desvinculación al Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, cuando el funcionario se haya acogido a algún plan de retiro voluntario o haya sido reubicado en los términos previstos en el presente artículo.

Artículo 65. Asignación y traslado presupuestal. Autorízase al Gobierno Nacional para que, conforme con el Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto 111 de 1996, realice las asignaciones y traslados presupuestales que requiera la puesta en marcha de la presente ley.

Artículo 66. De la contratación. En concordancia con lo dispuesto en el capítulo Segundo del Título V y del Capítulo 5 del Título VII de la Constitución Política, los entes solidarios de carácter público así como aquellos cuyo patrimonio esté conformado parcialmente con recursos públicos, se sujetarán en la celebración de contratos, a los principios de transparencia, igualdad, imparcialidad, publicidad, economía, celeridad, moralidad, eficiencia y responsabilidad.

Para toda contratación con el Dansocial como la Superintendencia de la Economía Solidaria, tendrán prelación las entidades de la Economía Solidaria competentes, en igualdad de condiciones.

Artículo 67. Vigencia. La presente ley empezará a regir a partir de su promulgación, modifica en lo pertinente el Decreto 2150 de 1995 y deroga las disposiciones que le resulten contrarias, en particular el artículo 17 del Decreto 1688 de 1997 y el Decreto 619

de 1998. La Ley 79 de 1988 continuará vigente en lo que no resulte contrario a lo dispuesto en la presente ley.

El Presidente del honorable Senado de la República,
AMYLKAR ACOSTA MEDINA
El Secretario General del Honorable Senado de la República,
PEDRO PUMAREJO VEGA
El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
CARLOS ARDILA BALLESTEROS
El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
DIEGO VIVAS TAFUR
Republica de Colombia-Gobierno Nacional

Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 1998.
ERNESTO SAMPER PIZANO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Antonio José Urdinola Uribe.
La Directora del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas,
Myriam Cristina Juri Montes.

4.11 COSTA RICA

LEY 6.756 **LEY DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y CREACION DEL** **INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO** **(del 30 de abril de 1982)**

TITULO I **DE LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS**

CAPITULO I **DISPOSICIONES GENERALES**

Artículo 1

Declárase de conveniencia y utilidad pública y de interés social, la constitución y funcionamiento de asociaciones cooperativas, por ser uno de los medios más eficaces para el desarrollo económico, social, cultural y democrático de los habitantes del país.

Artículo 2

Las cooperativas son asociaciones voluntarias de personas y no de capitales, con plena personalidad jurídica, de duración indefinida y de responsabilidad limitada, en las que los individuos se organizan democráticamente a fin de satisfacer sus necesidades y promover su mejoramiento económico y social, como un medio de superar su condición humana y su formación individual, y en las cuales el motivo del trabajo y de la producción, de la distribución y el consumo, es el servicio y no el lucro.

Artículo 3

Todas las cooperativas del país deberán ajustarse estrictamente a los siguientes principios y normas:

- a) Libre adhesión y retiro voluntario de los asociados.
- b) Derecho de voz y un solo voto por asociado.
- c) Devolución de excedentes y aceptación de pérdidas por parte de los asociados en proporción a las operaciones que realicen con la cooperativa de acuerdo a su participación en el trabajo común.
- d) Pago de un interés limitado a los aportes hechos al capital social.
- e) Neutralidad racial, religiosa y política e igualdad de derechos y obligaciones de todos los asociados.
- f) Fomento de la integración cooperativa.
- g) Fomento de la educación y del bienestar social y mejoramiento de las condiciones de vida de los asociados y sus familias.
- h) Duración indefinida, capital variable e ilimitado, y número ilimitado de asociados.
- i) Responsabilidad limitada.
- j) Irrepartibilidad entre los asociados de las reservas establecidas por ley y de excedentes producidos por las operaciones con personas que, sin ser asociados, hubieran usado los servicios de la cooperativa y de los ingresos no provenientes de la función social de la cooperativa, y

k) Autonomía en su gobierno y administración con excepción de las limitaciones que establece la presente ley.

Artículo 4

Queda absolutamente prohibido a toda asociación cooperativa realizar cualquier actividad que no se concrete al fomento de los intereses económicos, sociales y culturales de sus asociados. Las cooperativas debidamente registradas gozarán en forma irrestricta de todos los derechos y garantías necesarias para el cumplimiento de sus fines. En consecuencia, serán absolutamente nulos los actos de las entidades privadas o de los órganos públicos que impongan restricciones directas o indirectas a la actividad de esas asociaciones, salvo cuando las disposiciones legales expresamente establezcan esas restricciones. Por tanto, las cooperativas quedan absolutamente libres de cualquier tipo de regulación o control por parte de organismos o instituciones del Estado, autónomas o semiautónomas, que la ley no establezca en forma específica.

Artículo 5

Los asociados de una cooperativa tienen el deber de realizar sus transacciones y operaciones con la misma; en caso de que no lo hicieran, sin razón que lo justifique, sufrirán las sanciones previstas en la presente ley y en los estatutos de la cooperativa.

Artículo 6

Las asociaciones cooperativas disfrutarán de los siguientes privilegios:

- a) Exención del pago del impuesto territorial por un término de diez años a partir de la fecha de su inscripción legal.
- b) Exención de todo impuesto o tasa, nacional o municipal, sobre los actos de formación, inscripción, modificación de estatutos y demás requisitos legales para su funcionamiento.
- c) Prioridad en el transporte terrestre, marítimo y aéreo, en empresas estatales o en particulares que reciban subvención oficial, y rebaja del diez por ciento en los fletes de los artículos de giro de ellas que se transporten en dichas empresas.
- d) Rebaja del cincuenta por ciento en los impuestos de papel sellado, timbres, y derechos de registro, en los documentos otorgados por ellas en favor de terceros o de éstas en favor de aquellos, y en todas las actuaciones judiciales en que tengan que intervenir, activa o pasivamente.
- e) Exención del pago de los impuestos de aduanas sobre las herramientas, materias primas, libros de texto, vehículos automotores de trabajo, maquinaria, piezas de repuesto, equipo y enseres de trabajo, medicinas, herbicidas, fertilizantes, sacos y cualesquiera otros medios de empaque, simientes, animales y cualesquiera otros artículos que importen para las actividades que les sean propias siempre que en el país no se produzcan de calidad aceptable, o que la producción nacional no sea suficiente para abastecer el mercado; estos dos últimos puntos a juicio de una comisión integrada por un representante del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, un representante del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y un representante del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo que establezca el reglamento. Los bienes importados mediante exención al amparo de la presente ley podrán ser vendidos o traspasados por las cooperativas, uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas siempre que sean pagados al tiempo transcurrido los derechos de importación correspondientes. Transcurridos cuatro años de haber sido inscritos a nombre de la cooperativa, los mismos podrán ser traspasados libres de todo gravamen a cualquier persona.
- f) Exención del pago del cincuenta por ciento de los impuestos de aduana sobre los artículos alimenticios, y medicinas que importen las cooperativas del consumo, siempre que no se produzcan en el país o que la producción nacional no alcance a satisfacer en forma total la demanda.
- g) Derecho a contratar preferentemente con el estado, en igualdad de condiciones para la venta, adquisición o distribución de productos o prestación de servicios que sean requeridos por aquel o cualquiera de sus instituciones.
- h) Derecho de administrar los servicios de distribución de energía, fábricas y talleres que forman parte del patrimonio del Estado.
- i) Derecho a obtener del Instituto Nacional de Seguros al costo, todos los tipos de pólizas que dicha institución, extienda, pero exclusivamente a través de las uniones, federaciones o de la Confederación Nacional de Cooperativas que la presente ley autoriza.
- j) Derecho a obtener de las instituciones encargadas de la producción o distribución de la energía eléctrica, tarifas preferenciales en cuanto al precio de compra de dicha energía, particularmente para aquellas cooperativas que operan en las zonas rurales del país.
- k) Para efectos de calcular el impuesto sobre la renta, de los asociados de las cooperativas se tomará en cuenta sólo el 50% de los ingresos que provengan de los excedentes e intereses de sus certificados de aportación de las cuotas de inversión obtenidas en la cooperativa.

Artículo 7

A ninguna entidad, firma, corporación o asociación que no se ajuste rigurosamente a las formalidades prescritas en esta Ley, cualesquiera que sean sus actividades, les será permitido usar la bandera o el emblema internacional o nacional de la cooperación, ni adoptar la denominación "Cooperativa" u otra análoga que pudiera inducir a error, ni insertarlas en su razón social o en sus títulos ni usarlos en forma alguna en sus documentos, papelería, avisos o publicaciones. Durante el período de organización de una cooperativa deberá ésta adoptar dicha denominación pero agregando la frase "en formación". Para estos efectos el Instituto Nacional de fomento Cooperativo que esta ley crea, llevará un registro de las cooperativas en formación y señalará en cada caso el lapso durante el cual podrán hacer uso de la facultad que otorga este artículo.

Artículo 8

Para los efectos de la Ley de Marcas Nº 550 del 24 de junio de 1946 y sus reformas, el nombre de las cooperativas será registrado de oficio y libre de todo derecho, por la Oficina de Marcas de Fábrica y Comercio al aparecer en "La Gaceta" el aviso de la resolución del Instituto Nacional de fomento cooperativo, por el cual autoriza el funcionamiento de la cooperativa.

La publicación en "La Gaceta" de la sentencia de disolución de una cooperativa, o el acuerdo de disolución aprobado por la asamblea general, cancela automáticamente la inscripción en el registro y la Oficina de marcas pondrá la razón al margen del asiento correspondiente. Las federaciones y uniones de cooperativas de todo tipo, que exporten productos nacionales de sus afiliados, podrán inscribir en ese registro, bajo su propio nombre, marcas de fábrica o de comercio con indicación de origen y procedencia, pudiendo registrar el origen o procedencia del producto de la respectiva cooperativa afiliada.

Artículo 9

Las cooperativas podrán extender sus servicios a personas no asociadas si a juicio de la asamblea la buena marcha de ella lo aconseja y con previa aprobación del INFOCOOP.

Artículo 10

Las cooperativas sin lesionar el derecho de los asociados a retirarse y recibir el aporte que hubieren hecho, con el fin de no poner en peligro su estabilidad y buena marcha, podrán reglamentar estatutariamente el ejercicio del derecho al retiro, en la forma dispuesta por esta ley.

Artículo 11

Ninguna función directiva podrá vincularse a persona determinada o delegarse a empresa gestora alguna ni tener un período superior de dos años. El gerente será nombrado por período de cuatro años. Tanto los miembros del consejo de administración como los de los comités y el gerente podrán ser reelectos.

Artículo 12

A ninguna cooperativa le será permitido:

- a) Imponer en sus estatutos condiciones rigurosas para el ingreso de nuevos asociados que impidan su crecimiento constante, armónico y ordenado. Deberá estimularse por todos los medios el ingreso de nuevos asociados, de manera que el rápido y eficiente desarrollo no se limite por razón del número de estos o por cualquier otra causa que las convierta en organizaciones cerradas.
- b) Establecer con comerciantes, entidades comerciales, hombres de negocios, o cualquier otra persona extraña a la cooperativa, combinaciones, acuerdos o celebrar contratos, que hagan participar a estos directa o indirectamente en los beneficios y franquicias que otorga la presente ley.
- c) Remunerar en forma alguna a cualquier persona por el hecho de proporcionar nuevos asociados o colocar certificados de aportación.
- d) Conceder ventajas o privilegios a los iniciadores, asociados fundadores, directores o administradores, o cualquier otro tipo de privilegio.
- e) Hacer inversiones con fines de especulación o usura; y
- f) Desarrollar actividades para las cuales no esté legalmente autorizada.

Artículo 13

Para efecto de que las cooperativas recuperen con prontitud las sumas de dinero que se les deban, tendrán derecho a cobrarlas por la vía ejecutiva; con tal fin, las certificaciones que extienda la gerencia de esas asociaciones sobre dichas sumas, tendrán el carácter de título ejecutivo. Las retenciones por cuotas de asociación y los abonos a préstamos que haya concedido una cooperativa, tendrán prioridad sobre cualquier otro tipo de retenciones que deba hacerse al asociado o a los fiadores solidarios, excepto que se

trate de cuotas para la Caja Costarricense de Seguro Social, o de pensión alimenticia a que esté obligado.

El Estado y las instituciones públicas, sí como los patronos, quedan obligados a rebajar de los pagos a sus trabajadores y a entregar sin dilación alguna a la cooperativa gestionante, las sumas que éstas les indiquen por cuotas de ingreso, aportes, abonos o préstamos o, en su caso, pagos provenientes del compromiso adquirido por concepto de fianza.

Artículo 14

Para fomentar, dentro de sus respectivas jurisdicciones y por los medios que estimen convenientes, el establecimiento y desarrollo de las cooperativas, las municipalidades quedan facultadas para convertirse en asociadas de aquellas, auxiliarlas con subvenciones y donarles terrenos o locales o cualesquiera otras facilidades que éstas puedan requerir, previa autorización del IFAM.

CAPITULO II DE SU CLASIFICACION

Artículo 15

Las cooperativas son: de consumo, de producción, de comercialización, de suministros, de ahorro y crédito, de vivienda, de servicios, escolares, juveniles, de transportes, múltiples y en general de cualquier finalidad lícita y compatible con los principios y el espíritu de cooperación.

Las cooperativas de producción de bienes y servicios que llenen los requisitos que esta ley establece en los Capítulos XI y XII, se clasificarán además como de cogestión o de autogestión, respectivamente.

Artículo 16

Las cooperativas de consumo tienen por objeto la adquisición, provisión y distribución de cualquier clase de bienes entre sus asociados, en calidad de consumidores, para su auxilio mutuo.

Artículo 17

Las cooperativas de producción tienen por objeto la producción, manufactura o transformación en forma directa por parte de los asociados, de artículos naturales elaborados, o la iniciación o desarrollo de toda clase de explotaciones agrícolas, ganaderas, industriales y artesanales distribuyendo los excedentes que pudieran acumularse por su gestión de trabajo en conjunto, en proporción con la producción, al trabajo manual o intelectual; o al rendimiento que cada uno de los asociados haya contribuido a la empresa.

Estas cooperativas deberán emplear de modo preferente a sus asociados en los trabajos y obras que emprendieren. Excepcionalmente podrán ocupar personal extraño que no sobrepase el 30% del número de asociados en los siguientes casos: cuando las circunstancias extraordinarias o imprevistas lo exijan; para la ejecución de obras determinadas y por tiempo fijo o para trabajos eventuales distintos de los requeridos por el objeto de la cooperativa. En todos los casos, esto procederá cuando los asociados por su número o por falta de idoneidad no satisfagan de modo evidente las necesidades de la cooperativa.

Para la ejecución de tales trabajos deberá referirse a otras cooperativas que estuvieren en capacidad de realizarlos.

En asuntos contractuales de trabajo estas cooperativas se regirán por las disposiciones contenidas en la legislación laboral vigente, pero para los efectos de la relación jurídica del asociado con la cooperativa, debe interpretarse que su estatus económico social ha de ser la de socio-trabajador, como una sola persona física, según queda prescrito en los párrafos precedentes.

Artículo 18

Las cooperativas de comercialización tienen por objeto la recolección, centralización, selección, clasificación, preparación e industrialización, empaque y venta mancomunada de artículos naturales elaborados o de ambos, producidos por sus asociados. Pueden ser agropecuarios, industriales o artesanales.

Artículo 19

Las cooperativas de suministro tienen por objeto principal impulsar el desarrollo de la agricultura, de la ganadería y de la industria nacional, mediante la adquisición y distribución de materias primas, enseres, maquinarias, equipo, accesorios, herramientas, semovientes y otros bienes o la distribución de productos naturales o elaborados.

Artículo 20

Las cooperativas de giro agropecuario-industrial de servicios múltiples, que combinan las modalidades de las cooperativas señaladas en los tres artículos anteriores, tienen por objeto la producción, procesamiento, mercadeo y suministro de artículos agropecuarios naturales o industrializados, tales como granos, henos, semovientes, carne, leche, quesos y los demás subproductos, mieles, concentrados, medicinas veterinarias. tienen libertad de colocar sus productos en los mercados nacionales y extranjeros al amparo de todas las ventajas que les proporciona la ley de cooperativas.

Las cooperativas agrícolas que reciben adelantos y créditos del INFOCCOP o del Sistema Bancario Nacional y que durante sus primeros años se enfrentan a situaciones de difícil competencia, recibirán financiamiento de los bancos del Sistema Bancario Nacional o del INFOCCOP en el monto y condiciones que les permitan restablecer el equilibrio. Esta disposición se aplicará a petición de la cooperativa afectada y previo el estudio que el INFOCCOP o el baño respectivo deberá hacer.

Las cooperativas agrícolas estarán facultadas para contratar préstamos con el Sistema Bancario Nacional o con el INFOCCOP con el fin de adquirir las fincas que llegasen a adjudicarse los bancos o de fincas que consideren aptas para los fines de la cooperativa, con el propósito de dotar de terrenos a sus asociados que alquilan o siembran en esquilme, y para incrementar los terrenos de los asociados, con el objeto de lograr una unidad económica más eficiente. Estos préstamos deberán llevar la fianza y aprobación del INFOCCOP y deben satisfacer las posibilidades económicas del productor en cuanto a plazos e intereses.

Artículo 21

Las cooperativas de ahorro y crédito tienen por objeto primordial fomentar en sus asociados el hábito del ahorro y el uso discreto del crédito personal solidario.

Pueden ser de dos clases:

- a) Las de ahorro y crédito propiamente dichas, que tienen por finalidad solventar necesidades urgentes en los hogares de los asociados y facilitar la solución de sus problemas de orden económico; y
- b) Las de ahorro y crédito refaccionario, que tienen por objeto procurar a sus asociados préstamos y servicios de garantía para ayudarlos al mejor desarrollo de sus actividades en explotaciones agrícolas, ganaderas o industriales.

Funcionarán de acuerdo con las siguientes normas especiales:

1. No podrán ser miembros de ellas las personas que lo fueren de sociedades comerciales, formadas sobre la base de responsabilidad solidaria e ilimitada de sus miembros.
2. Sus operaciones no podrán hacerse con fines de lucro.
3. En ningún caso podrá variarse el destino de los créditos, ni permitirse que desmejore la garantía otorgada; si se hiciere, la cooperativa tendrá facultad para dar por vencido el plazo y exigir el pago del préstamo total, más los intereses y costas, sin sujeción a formalidades.
4. No tendrán límite fijo en cuanto a monto y plazo de la sumas que por concepto de ahorro y depósitos puedan recibir y emprestar a sus asociados.

5. Las condiciones generales para el ahorro y el crédito en cada caso serán establecidas por los respectivos reglamentos y regulados por el consejo de administración.
6. La asamblea nombrará una comisión de crédito, compuesta de tres a cinco miembros, la cual debe pronunciarse sobre cada solicitud de crédito.
7. El INFOCCOP podrá conceder créditos dirigidos a la agricultura, para que sus asociados de escasos recursos puedan hacer efectivos sus programas de desarrollo agrícola familiar. Las Agencias Locales de Extensión Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería, deberán actuar como organismo de asistencia técnica de la inversión.
8. Los documentos de crédito a favor de estas cooperativas podrán ser negociados o descontados por cualquier institución de crédito.

Artículo 22

Las cooperativas de vivienda tienen por objeto facilitar a sus asociados la construcción, adquisición, reparación o arrendamiento de sus viviendas. Las disposiciones legales vigentes sobre la construcción, concesión, arrendamiento o venta de casas baratas y las exenciones y facilidades que al respecto se hayan concedido o se concedan por leyes especiales, se aplicarán a esta clase de cooperativas en cuanto no se contradigan las normas de la presente ley.

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, por su capacidad técnica en el campo de la vivienda y por convenir a la realización de sus objetivos, deberá asesorar a las cooperativas de vivienda o a las de ahorro y crédito que efectúen préstamos para la compra o construcción de viviendas, cuando éstas se lo soliciten, y colaborar con ellas en la vigilancia de la construcción, siguiendo las normas y especificaciones que dicte el INVU.

Artículo 23

Las cooperativas de servicios tienen por finalidad la prestación de los mismos, para satisfacer necesidades específicas de sus asociados. Podrán llenar necesidades de asistencia y previsión social, tales como: asistencia médica o farmacéutica, de hospitalización, de restaurante, de educación, de recreación, de auxilio o pensiones para la vejez, de mutualidad, de seguros, de protección contra el desempleo o accidente, de gastos de sepelio, o necesidades dentro del campo de la agricultura, la ganadería y la industria, Tales como servicios eléctricos y telefónicos, transporte, inseminación artificial, mecanización agrícola, irrigación y suministro de combustibles. Asimismo podrán satisfacer cualquier otra necesidad compatible con la doctrina y finalidad del sistema cooperativo. En el caso de cooperativas de servicios que tenga por finalidad suplir necesidades dentro del campo de la agricultura, la ganadería y la industria, pueden ser asociadas las personas jurídicas, siempre que no usen los servicios de la cooperativa con fines de lucro y previa autorización en cada caso, del INFOCOOP. Las cooperativas de electrificación rural gozarán de los mismos privilegios y exenciones que la ley le confiere a las juntas administrativas de servicios eléctricos municipales.

Artículo 24

Las cooperativas escolares tienen una finalidad primordialmente educativa orientada en el sentido de que los estudiantes se familiaricen con las prácticas de ayuda mutua, a tomar sus propias decisiones, a trabajar en equipo, a ser sociables, a ser respetuosos de los derechos de otras personas y en suma, que constituyan un medio coadyuvante a la formación integral de su personalidad. Podrán ser constituidas por patronatos escolares, juntas de educación, juntas administrativas, padres de familia, maestros, profesores y

estudiantes, dirigidas a la atención de las necesidades de un plantel educativo y de los propios interesados.

Artículo 25

Las cooperativas juveniles son las organizadas por estudiantes, niños, adolescentes y jóvenes, con el propósito esencial de proporcionarles una formación cooperativista y de tender otras necesidades propias de la edad. En las cooperativas escolares y juveniles los menores se considerarán con capacidad legal para todos los actos que ejecuten dentro de la asociación, excepto en las relaciones de las cooperativas como terceros, en cuyo caso aquella deberá estar representada por personas con plena capacidad legal.

Artículo 26

Las cooperativas de servicios múltiples son aquellas que combinan cualesquiera de las formas anteriores. Podrán abarcar objetos y propósitos diversos, a condición de que no sean incompatibles entre sí y que en lo pertinente, se cumplan las reglas especiales a que debe ajustarse cada una de las clases de cooperativas.

Artículo 27

Las cooperativas de transporte pueden ser de tres clases:

- a) De transporte de pasajeros organizadas por concesionarios, usuarios y vecinos de la comunidades. Las cooperativas gozarán de prioridad en la adjudicación de rutas y líneas que se liciten por el aumento de los usuarios o de las necesidades.
- b) De servicio público, organizadas por propietarios de taxímetros, propiedad de los trabajadores o taxistas que tengan como medio de vida este servicio al público.
- c) De transporte de mercaderías, productos y materiales, organizadas por transportistas propietarios y trabajadores en esa rama de servicio; cuando las necesidades así lo demanden, las modalidades de las cooperativas señaladas en los incisos a), b) y c) de este artículo, podrán combinarse para formar una asociación cooperativa. Las cooperativas de transporte podrán contratar préstamos para construir almacenes de suministro, propios de su actividad, instalar estaciones de servicio, talleres, oficinas y satisfacer cualesquiera otra necesidad propia de su giro.

Artículo 28

El INFOCOOP podrá autorizar el establecimiento de cualquier otro tipo de cooperativa no contemplado en las disposiciones anteriores, siempre que persiga fines de cooperación y se constituya de acuerdo con las disposiciones de esta ley.

CAPITULO III

DE LA CONSTITUCION E INSCRIPCION

Artículo 29

El registro, inscripción y autorización de personería jurídica de las asociaciones cooperativas estará a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo será atribución de él, solicitar a la autoridad respectiva, cuando proceda la suspensión o disolución de las mismas. El Registro Público de Asociaciones Cooperativas formará parte del Registro de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 30

Las asociaciones cooperativas constituidas en la forma que prescribe esta ley, tendrán plena personería jurídica.

Artículo 31

Las cooperativas se sujetarán a las siguientes condiciones:

- a) Se constituirán con responsabilidad limitada, y de sus compromisos responderán el haber social y los asociados hasta por el monto de los aportes suscritos.
- b) Se constituirán mediante asamblea que celebren los interesados, de la cual se levantará un acta.
- c) No podrán constituirse mientras no esté suscrito íntegramente el patrimonio social inicial y no se haya pagado, por lo menos, el 25% del importe total del mismo. En el caso de las cooperativas de autogestión, este aporte inicial podrá estar constituido por el compromiso de trabajo de los socios según lo que establezca el reglamento.
- d) No podrá constituirse con un número menor de 20 asociados, exceptuándose las cooperativas de autogestión que se constituirán con un número no menor de 12 personas.
- e) Tendrán su domicilio legal en el lugar donde realicen el mayor volumen de sus operaciones.

Artículo 32

Para que sea autorizado el inicio de sus actividades, las asociaciones cooperativas deberán presentar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social los siguientes documentos:

- a) El estudio de posibilidades, viabilidad y utilidad o factibilidad de la cooperativa de acuerdo a lo que establece el reglamento.
- b) Copia del acta de la asamblea constitutiva de la asociación, con expresión del nombre, los dos apellidos, nacionalidad, domicilio, profesión u oficio de los miembros fundadores, el monto de los certificados de aportación suscritos y los que hubiera pagado cada uno, así como los nombres de los integrantes del consejo de administración, del gerente, del comité de vigilancia y de los otros comités que se hubieren designado, debidamente autenticada por un abogado.
- c) Copia de los estatutos aprobados por la asamblea constitutiva, y
- d) Certificación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo sobre la existencia del veinticinco por ciento del patrimonio social suscrito por los asociados, exceptuándose las cooperativas de autogestión que presentarán una certificación de la entidad pública donde conste la tendencia cierta del recurso de que se trate, o en su caso del trabajo expresado en día/hombre, que los socios se comprometen a aportar.

Artículo 33

Una vez cumplidos los requisitos exigidos por el artículo anterior, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social examinará los estudios de posibilidad, viabilidad y utilidad de las cooperativas y si éstos resultaren satisfactorios y no existieren impedimentos legales y objeciones que hacer al acta de constitución o a los estatutos deberá proceder dentro del plazo de un mes, siguientes a la presentación de la solicitud, a extender la autorización correspondiente. Cumplido este plazo y sin que se hubiere pronunciado el Instituto de Fomento Cooperativo, sobre lo que indica el inciso d) del artículo 32, se tendrá por aprobada la solicitud y de conformidad se procederá a su inscripción.

Cuando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deniegue la inscripción de una cooperativa, la resolución respectiva, debidamente fundamentada y con clara indicación de los defectos de fondo de que adolecieren los documentos de inscripción, será comunicada a los interesados, a fin de que sean subsanadas. Una vez corregidos por los interesados los defectos de fondo ordenará su inscripción conforme a lo dispuesto en esta Ley. Los defectos de forma serán corregidos de oficio por el registrador.

Artículo 34

Para que una solicitud de inscripción pueda ser considerada y aceptada, los estatutos de la cooperativa deberán contener:

- a) Su nombre, en el cual deberán figurar la palabra "cooperativa", el nombre y las iniciales "R.L.". La denominación no podrá coincidir con la de otras asociaciones cooperativas ya inscritas.
- b) Su domicilio social.
- c) El objeto de la asociación y propósitos fundamentales.
- d) El monto del patrimonio social inicial, el número y el valor de los certificados de aportación en que se divide y la época y forma de pago, excepto en las cooperativas de autogestión.
- e) Deberes y derechos de los asociados.
- f) Las condiciones de admisión y retiro voluntario y las causas de exclusión de los asociados. Los asociados sólo podrán ser excluidos de una cooperativa con la aprobación de las dos terceras partes de los que estuvieren presentes en la asamblea que conozca el asunto.
- g) las correcciones disciplinarias aplicables a los asociados.
- h) La forma de constituir, incrementar o reducir el patrimonio social.
- i) La forma de evaluar los bienes o derechos que hubieren aportado sus asociados.
- j) La forma y reglas de distribución de los excedentes obtenidos durante el respectivo ejercicio económico.
- k) La forma de traspasar los certificados de aportación y las limitaciones que al efecto se estipulen, excepto en las cooperativas de autogestión.
- l) Las garantías que deberá rendir el personal encargado de la custodia de los bienes y fondos de la asociación.
- m) Los requisitos que deberán llenarse para reformar los estatutos.
- n) El mes de cada año en que se reunirá la asamblea para elegir los órganos administrativos de la cooperativa, para conocer la rendición de informes, cuentas, distribución de excedentes, inventarios, balances, memorias y en general, para considerar todos los asuntos sobre los cuales dicha asamblea tenga jurisdicción.
- o) Las causas de disolución de la cooperativa y el método de efectuar su liquidación.
- p) La definición del órgano administrativo facultado para la promulgación de los reglamentos y operaciones internas; y
- q) Las demás estipulaciones y reglas que se consideren necesarias para el buen funcionamiento de la asociación, siempre que no se opongan a la presente ley.

Artículo 35

Corresponde al gerente tramitar con el visto bueno del consejo de administración, la aprobación de los estatutos y del acta constitutiva; aceptar a nombre de la cooperativa, las modificaciones de los mismos que la autoridad correspondiente indique; y en general, firmar todos los contratos, órdenes de pago y documentos conducentes a tener por legalmente constituida la cooperativa.

CAPITULO IV DE LA ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 36

La dirección, administración y vigilancia interna de las asociaciones cooperativas, estará a cargo de: a) La asamblea general de asociados o delegados. b) El consejo de administración. c) El gerente. d) El comité de vigilancias . e) El comité de educación y

bienestar social; y f) Los comités y comisiones que pueda establecerse con base en esta ley y las que designe la asamblea general.

Artículo 37

La asamblea general o la de delegados, según el caso, será la autoridad suprema y sus acuerdos obligan a la cooperativa y a todos sus asociados, presentes y ausentes, siempre que estuvieren de conformidad con esta ley, los estatutos y los reglamentos de la cooperativa. Estará integrada por todos los asociados que al momento de su celebración estuvieren en el pleno goce de sus derechos.

Artículo 38

Las reuniones de la asamblea podrán ser ordinarias y extraordinarias. La asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año en el mes que indique el estatuto de la cooperativa. La asamblea extraordinaria se reunirá cada vez que se presenten asuntos extraordinarios de importancia que así lo demanden o cuando así lo disponga la ley.

Artículo 39

Corresponde a la asamblea la elección del consejo de administración y los comités que establezcan la ley y los estatutos.

Artículo 40

La asamblea deberá elegir dos suplentes, los cuales sustituirán a los propietarios en sus ausencias temporales, definitivas o cuando dejen de asistir a las reuniones del consejo de administración por tres veces consecutivas sin causa que lo justifique. En los dos últimos casos, los suplentes entrarán a ser integrantes del consejo, observando el orden en que fueron electos, y se deberá proceder a hacer una nueva elección de los cargos, en la sesión en la cual se integra el nuevo miembro.

Artículo 41

Aún cuando podrán ser conocidos en asambleas ordinarias, los siguientes asuntos se tratarán preferentemente en asambleas extraordinarias convocadas al efecto: a) Remoción y sustitución de los miembros del consejo de administración y el comité de vigilancia, antes de que expire el término para el cual fueron elegidos cuando fuere el caso y previa comprobación de cargos. b) Modificación de los estatutos de la cooperativa. c) Disolución voluntaria de la asociación; y d) Unión o fusión con otras cooperativas, federaciones, uniones o confederaciones.

Artículo 42

Cuando las condiciones de una cooperativa así lo aconsejen, el INFOCOOP podrá autorizar que la asamblea de asociados se sustituya por una asamblea de delegados, la cual nunca podrá tener menos de cincuenta miembros electos en la forma y condiciones que indiquen los estatutos, de suerte que sea fiel expresión de los intereses de todos los asociados. Los miembros del consejo de administración y del comité de vigilancia, serán delegados ex officio. En caso de las cooperativas de autogestión se considera delegado ex officio al gerente, siempre y cuando, sea socio de la cooperativa.

Artículo 43

En la asamblea, cada asociado tendrá derecho a un voto, cualquiera que sea el número de aportaciones que hubiere hecho, o el monto de las operaciones que tuviere con la cooperativa.

La asistencia y votación por medio de un delegado, será permitido siempre que se reúnan estas condiciones:

- a) Que el delegante y el delegado estén el pleno goce de sus derechos como asociados; y
- b) Que ningún asociado represente más de un delegado.

La representación se hará por simple carta deberá enviar el delegante al gerente de la cooperativa, en forma directa.

Artículo 44

La asamblea de asociados, ordinaria o extraordinaria, se considerará legalmente constituida en primera convocatoria, cuando esté presente al menos, la mitad más uno de sus miembros.

Si no se lograra el quórum exigido dentro de la hora posterior a la fijada en la primera convocatoria, la asamblea de asociados podrá efectuarse legalmente con la asistencia del 30% de sus integrantes. En el caso de las cooperativas de autogestión, no podrá efectuarse con menos de 12 miembros; y en las demás, con no menos de 20 miembros.

En la asamblea de delegados, sea ordinaria o extraordinaria, el quórum en primera convocatoria, no será inferior a dos tercios del total de delegados. En la asamblea de delegados, en su segunda convocatoria, dos horas después, deberán estar presentes por lo menos la mitad más uno de ellos y nunca menos de 30.

Artículo 45

Las asambleas ordinarias y extraordinarias deberán ser convocadas por el gerente, a solicitud del consejo de administración, del comité de vigilancia o de un número de asociados que represente el veinte por ciento del total de asociados. En caso de una cooperativa con más de 250 asociados, 50 de ellos podrán pedir que se convoque a asamblea extraordinaria.

Artículo 46

Corresponde al consejo de administración, que será integrado por un número impar no menor de cinco miembros, la dirección superior de las operaciones sociales, mediante acuerdo de las líneas generales a que debe sujetarse el gerente en la realización de los mismos, dictar los reglamentos internos de acuerdo con la ley o con sus estatutos, proponer ala asamblea reformas a los estatutos de la cooperativa y velar porque se cumplan y ejecuten sus resoluciones y las de la asamblea general de asociados o delegados.

También podrá conferir el gerente toda clase de poder, generalísimo, generales, especiales y especialísimo, para llevar a cabo su gestión administrativa, así como suspenderlo de su cargo o removerlo.

Artículo 47

En sesión que deberá celebrarse después de la elección de nuevos miembros del consejo de administración se elegirán un presidente, un vicepresidente, un secretario, los vocales y las comisiones de trabajo que establezcan los estatutos.

Artículo 48

Los estatutos de cada cooperativa establecerán el quórum necesario para que el consejo de administración sesione válidamente, el cual, en ningún caso podrá ser inferior a la mayoría absoluta de sus miembros. También establecerán los estatutos la forma de tomar los acuerdos.

Artículo 49

Corresponde al comité de vigilancia elegido por la asamblea, que se integrará con un número no menor de tres asociados, el examen y fiscalización de todas las cuentas y operaciones realizadas por la cooperativa, e informar lo que corresponda ante la asamblea.

La responsabilidad solidaria de los miembros del consejo de administración y del gerente alcanza a los miembros del comité de vigilancia por los actos que éste no hubiere objetado oportunamente.

Quedan exentos de responsabilidad los miembros del comité que salven expresamente su voto dentro del mes siguiente al acto de tomarse la decisión respectiva.

Artículo 50

Corresponde al comité de educación y de bienestar social, cuyo número de miembros determinarán los estatutos:

- a) Asegurar para los asociados de la cooperativa y personas que quieran ingresar a ella, las facilidades necesarias para que reciban educación cooperativa y amplíen sus conocimientos sobre esta materia, por todos los medios que juzgue convenientes; y
- b) Redactar y someter a la aprobación del consejo de administración, proyectos y planes de obras sociales de los asociados de la cooperativa y de sus familias, y poner en práctica tales programas.

Artículo 51

La representación legal, la ejecución de los acuerdos del consejo de administración, y la administración de los negocios de la cooperativa, corresponden al gerente, quien es nombrado por el consejo de administración, por el período que fije el estatuto. Para ser removido de su cargo deberá contarse con el voto de dos tercios de los miembros del consejo de administración.

El gerente será responsable ante el consejo y la asamblea de todos los actos conectados con su cargo dentro de la cooperativa, y deberá rendir informes con la frecuencia que indiquen los estatutos y siempre que el consejo de administración lo pidiere. Para las ausencias temporales del gerente, el consejo de administración nombrará un gerente interino.

Artículo 52

Los miembros del consejo de administración y el gerente, que ejecuten o permitan ejecutar actos notoriamente contrarios a los intereses de la cooperativa, o que infrinjan la ley o los estatutos responderán solidariamente con sus bienes de las pérdidas que dichas operaciones irroguen a la cooperativa, sin perjuicio de las demás penas que les corresponden. El director o gerente, que desee salvar su responsabilidad personal, solicitará que se haya constar su voto o criterio contrario en el libro de actas.

Artículo 53

La cooperativa deberá pagar una póliza de fidelidad que cubra a los empleados que manejan fondos de la asociación por la suma que en cada caso señale el consejo de administración.

Artículo 54

Los miembros del consejo de administración, de los comités y el gerente serán salvo en los casos de las cooperativas escolares, legalmente capaces conforme a las leyes y a los respectivos estatutos, que deberán exigir condiciones de solvencia moral para desempeñar tales puestos.

Artículo 55

Ni los miembros del consejo de administración, ni el gerente, ni los asociaciados y trabajadores al servicios de una cooperativa, podrán dedicarse por cuenta propio o ajena, a ninguna labor o negocio similar que tenga relación con el giro principal de la cooperativa y de actividades conexas o afines con ésta. Si lo hicieren, el comité de vigilancia, previa comprobación de los hechos, exigirá al culpable abandonar inmediatamente el cargo y si es un asociado, ordenará la suspensión provisional del mismo, mientras la asamblea resuelve en definitiva el caso.

En las cooperativas de autogestión, la producción de huertas familiares que se destine al consumo directo de la familia del asociado, no tiene la calificación de competitiva. Si no son, en cambio, aquellos cultivos o actividades individuales que tengan por destino su venta o trueque a juicio de la asamblea general.

CAPITULO V DE LOS ASOCIADOS

Artículo 56

Para ser miembro de una cooperativa se requiere poseer los requisitos o condiciones exigidos por los estatutos.

Podrán ser miembros también las personas jurídicas que no persigan fines de lucro, aunque no reúna todos los requisitos que indiquen los estatutos. Se exceptúan las cooperativas de autogestión, en las cuales las personas jurídicas no podrán ser miembros.

Artículo 57

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25, tendrán capacidad para ser asociados y disfrutar de los derechos de una cooperativa, con excepción de ser electos para cargos en los cuales los estatutos establecen cierto mínimo de edad, los menores de uno u otro sexo, mayores de quince años.

Artículo 58

Los empleados y trabajadores de las cooperativas gozarán de facilidades especiales para ser admitidos en ellas como asociados regulares.

Artículo 59

Los cooperadores retirados o excluidos responderán de las obligaciones contraídas hasta el momento de su retiro o exclusión, por el término de un año.

Artículo 60

Aunque ninguna cooperativa puede imponer condiciones muy rigurosas para el ingreso o retiro de sus asociados, se considerarán válidas las cláusulas de los estatutos que exijan condiciones de solvencia moral, buena conducta, residencia, profesión, arte, oficio u otros similares, que conduzcan a una mejor realización de los fines que persigue la doctrina cooperativa.

Será absolutamente nula toda cláusula o acuerdo que tienda a suprimir el derecho de retiro voluntario de los asociados, mientras la asociación no se haya disuelto; por los estatutos podrán establecer condiciones y reglas para ejercerlo, especialmente con el objeto de que no dé lugar a disolución repentina por quedar la cooperativa con un número de miembros inferior al legal.

Artículo 61

Los miembros de las cooperativas no podrán sindicalizarse como tales asociados, para defender sus intereses ante ellas, toda vez que tienen derecho a expresar sus opiniones y defender sus derechos en las asambleas; pero sí podrán hacerlo los trabajadores de las cooperativas, sean o no asociados.

Artículo 62

El asociado que se retire o que sea excluido por cualquier causa, conservará sus derechos a los excedentes e intereses del ejercicio que estuviere en curso, hasta el momento de su retiro; el importe neto le será entregado una vez que finalice el ejercicio económico, en la forma y condiciones que dispongan los estatutos. En igual forma, tendrá derecho a que se le devuelva íntegramente el monto de los aportes pagados por él menos los saldos que deba a la asociación y la proporción que le corresponde en las pérdidas del patrimonio social, si las hubiere, en la forma y condiciones que dispongan los estatutos. También podrá en previsión de su fallecimiento nombrar un beneficiario de los aportes a que tenga derecho de acuerdo con este artículo.

Artículo 63

Las diferencias que se susciten entre la cooperativa y sus asociados, serán decididas por la autoridad judicial competente, pero los estatutos podrán establecer juntas arbitrales que las diriman en forma rápida y obligatoria debiendo integrarse en la forma y términos en que se constituyen los órganos administrativos.

Artículo 64

Los estatutos o reglamentos de las asociaciones cooperativas, podrán estipular una módica cuota de admisión que el asociado deberá pagar por una sola vez, que se destinará a cubrir los gastos previo de organización, constitución e inscripción de la asociación. Una vez cubierto el importe de esos gastos, el sobrante, si lo hubiere, y los ingresos provenientes de las cuotas de admisión de los nuevos asociados pasarán a los fondos de reserva de educación y bienestar.

Artículo 65

Ni las circunstancias de haber sido aceptado como asociado de una cooperativa, ni el monto de los certificados de aportación, ni la distribución de los excedentes obtenidos, autoriza a los cooperadores para intervenir directamente en la dirección y administración de los negocios sociales, salvo los derechos que tienen en las asambleas que al efecto se convoquen.

CAPITULO VI**PATRIMONIO SOCIAL****Artículo 66**

El patrimonio social de las cooperativas será variable e ilimitado y estará integrado en la siguiente forma:

- a) Con su capital social
 - b) Con los fondos y reserva de carácter permanente.
 - c) Con las cuotas de admisión y solidaridad, una vez deducidos los gastos de constitución y organización.
 - d) Con el porcentaje de los excedentes que se destinen para incrementarlo, de acuerdo con lo que disponga cada cooperativa en sus estatutos o por disposición de la asamblea;
- y

e) Con las donaciones, herencias, legados, privilegios, derechos de suscripción o subvenciones que reciban.

Artículo 67

El capital social estará compuesto por las aportaciones ordinarias en dinero efectivo, en bienes muebles e inmuebles, en derechos, en trabajo, industria, capacidad profesional o fuerza productiva que hagan los asociados y sus familiares, y estarán representados en certificados de aportación de igual valor nominal.

Las aportaciones que no sean en dinero efectivo, se valuarán al tiempo de ingresar la persona a la cooperativa, de conformidad con lo que al respecto establecen los estatutos.

Artículo 68

Los certificados de aportaciones que representan el capital social, deben ser nominativos, indivisibles, transmisibles únicamente a través del consejo de administración de la cooperativa, con los requisitos y condiciones que fijen los estatutos; contendrán las especificaciones y leyendas que acorde el consejo de administración de la cooperativa; se clasificarán en series numeradas una por cada emisión correspondiente al cierre del respectivo ejercicio económico. El monto de los certificados de aportación no será inferior a 50,000 ni superior a 200,000 salvo el caso de las cooperativas escolares, en las que podrán ser menor y será fijado por la asamblea.

Artículo 69

La asamblea podrá acordar la ampliación o reducción del capital social cada vez que los considere necesario y conveniente. En esos casos los asociados quedan obligados a suscribir el aumento o aceptar la devolución en la forma que lo disponga la asamblea. No obstante, el capital sólo podrá disminuirse hasta una cifra que no pongan en peligro el funcionamiento y la estabilidad económica de la cooperativa, a juicio y previa consulta al INFOCCOP siempre que se encuentre distribuido por los menos entre un número de cooperadores igual al mínimo que en esta ley se establece.

La disminución del capital que se acuerde en una asamblea, deberá comunicarse a los asociados ausentes sin pérdida de tiempo, por medios apropiados y por un aviso que se insertará tres veces en el diario oficial, y solo surtirá efecto treinta días después de aquel en que se hizo por primera vez la publicación.

Artículo 70

Si el patrimonio social de la cooperativa disminuyera por pérdida en el ejercicio de las cooperaciones sociales, podrá ser repuesto con fondo pertenecientes ala reserva legal, según lo dispongan los estatutos o lo acuerde la asamblea.

Si la reserva legal no alcanzare para cubrir las pérdidas, éstas se cargarán en forma proporcional al capital social pagado o suscrito según lo dispongan los estatutos en cada caso.

Los certificados de aportación, depósitos, participaciones o derechos de cualquier clase que correspondan a los asociados de una cooperativa, quedan vinculados preferentemente y desde su origen, a favor de ésta, como garantía de la obligación u obligaciones que aquéllos pudieran llegar a tener con la asociación.

Artículo 71

Los certificados de aportación de los asociados sólo podrán ser embargados por los acreedores de la cooperativa, dentro de los límites del capital y responsabilidad sociales. Dichos acreedores podrán ejercer los derechos de la cooperativa, relativos a los aportes

de capital no pagados, siempre que fueran exigibles y necesarios para el pago de las deudas sociales. Este privilegio otorgado a los referidos acreedores no excluye los derechos preferentes de la cooperativa, cuando ésta tenga que proceder contra los asociados, excepto en las cooperativas de autogestión que se regirán por lo que se establece en el capítulo XI.

Artículo 72

Los aportes de capital social por parte de los asociados de una cooperativa, podrán ser limitados, pero los estatutos, con el propósito de evitar situaciones financieras difíciles a la asociación en un futuro, podrán establecer porcentajes fijos sobre el monto máximo de los aportes económicos que puedan destinarse, a la conclusión de cada ejercicio económico, para cubrir a los asociados renunciando el monto de los aportes hechos a la asociación.

Artículo 73

Ningún asociado podrá presentarle embargos preventivos a la cooperativa, mientras ella cumpla con los estatutos y la ley.

Artículo 74

Los certificados de aportación ganarán el interés que establezca la asamblea, pero que en ningún momento podrá exceder del que establece el Banco Central de Costa Rica para los bonos bancarios.

Se pagará únicamente sobre las sumas hechas efectivas por los asociados y sólo podrán cubrirse con cargo a los excedentes obtenidos por la cooperativa.

En las cooperativas de autogestión dicho interés será fijado por la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión.

Artículo 75

La asamblea general de las cooperativas, con la aprobación del INFOCOOP, podrá emitir cuotas de inversión para destinar su producto al cumplimiento de objetivos determinados, tales como la adquisición de bienes o el otorgamiento de préstamos a los asociados, cuando éstos procedan.

Estas cuotas serán representadas por certificados nominativos e intransferibles, con base en las normas que para este fin establezca el INFOCOOP.

Artículo 76

El porcentaje máximo que se permitirá de emisión de estas cuotas, será igual al activo del balance practicado en la cooperativa interesada, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la respectiva emisión. El interés por estas cuotas, se abonará con preferencia a cualquier otro pago que deban realizar las cooperativas.

Tanto el capital invertido en las cuotas, como los intereses y demás beneficios que de ellos provengan, estarán exentos de toda clase de impuestos, derechos, contribuciones o gravámenes de carácter nacional o municipal.

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, las cuotas de inversión servirán para constituir garantías, especialmente las que exijan el Estado y sus organismos. En caso de ejecución de la garantía establecida con las cuotas, el acreedor deberá proceder a su liquidación con la cooperativa de que se trate y se hará con el monto que resulte.

Artículo 77

El INFOCOOP autorizará y podrá garantizar las emisiones de cuotas de inversión que realicen las cooperativas, conforme las normas establecidas en la presente ley, y las disposiciones de su Junta Directiva. Para los efectos de establecer esta garantía el

INFOCOOP cobrará a las cooperativas que estén autorizadas para realizar estas emisiones, una prima cuya forma de pago y monto serán determinados por los acuerdos que adopte la Junta Directiva del INFOCOOP.

En el caso de que las cooperativas no puedan cumplir las obligaciones contraídas con la emisión de cuotas de inversión, la garantía que otorgue el INFOCOOP deberá asumir el valor y los intereses de las cuotas emitidas por un monto que será establecido por su Junta Directiva.

El INFOCOOP, al hacerse efectiva la garantía, tomará a su cargo las cuotas de inversión y podrá cobrar ejecutivamente a la cooperativa obligada su valor, intereses y demás gastos, sin perjuicio de adoptar o solicitar de las autoridades correspondientes, las medidas que procedan.

CAPITULO VII DE LOS SALDOS Y EXCEDENTES

Artículo 78

Para los efectos legales y de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 3, se estimará que las cooperativas no tienen utilidades. Los saldos a favor que arroja la liquidación del ejercicio económico correspondiente, son ahorros o excedentes que pertenecen a sus miembros, producidos por la gestión económica de la asociación, y por ello no se pagará el Impuesto sobre la Renta.

Artículo 79

El producto de la liquidación, constatado por el inventario anual correspondiente, deducidos los gastos generales, las cargas sociales y las amortizaciones de todo género, constituyen el excedente o saldo del período respectivo.

Artículo 80

Los excedentes deberán destinarse, por su orden, a construir la reserva legal, la reserva de educación, la reserva de bienestar social, y cualesquiera otras reservas de bienestar social, y cualesquiera otras reservas establecidas por los estatutos; a cubrir las obligaciones provenientes de las cuotas de inversión; a pagar al CONACOOOP el 2% de los excedentes, conforme con lo estipulado en el artículo 136 de esta ley; a pagar a CENECOOP hasta el 2,5% de los excedentes líquidos al cierre de cada ejercicio económico, porcentaje éste que, a criterio del Consejo de Administración de cada cooperativa, podrá producirse de la reserva de educación.

Los porcentajes correspondientes a la formación de reservas especiales deberán establecerse en los estatutos de cada cooperativa, con excepción de las reservas legales, de bienestar social y de educación, cuyos porcentajes mínimos se establecen en los artículos 81, 82 y 83 de esta ley.

En el caso de las cooperativas de autogestión, el destino de los excedentes se regirá por lo estipulado en el capítulo XI de la ley N° 6756 citada.

Se faculta a las cooperativas para que, previa deducción de las reservas establecidas en el artículo 80 de la ley N° 6756 y en los estatutos de cada asociación cooperativa, mediante acuerdo de por lo menos dos terceras partes de su Consejo de Administración, puedan aplicar una corrección monetaria en procura de restituir el poder adquisitivo de las aportaciones de capital social de sus asociados. El INFOCOOP, previo criterio del CONACOOOP, reglamentará el procedimiento y aplicación de lo aquí dispuesto.

En todo caso, la asociación cooperativa que aplicare las técnicas de corrección monetaria y que, por efecto de ésta tuviera excedentes, deberán capitalizarlo en una cuenta especial

por un mínimo de cinco años, y podrá a partir del sexto año, acreditar lo correspondiente al primer año, y así sucesivamente, al capital social ordinario.

Lo anterior no regirá en los casos de muerte, invalidez o jubilación del asociado, en cuyo caso se girará al asociado, o en su defecto a sus beneficiarios, la totalidad de sus aportaciones y lo correspondiente por corrección monetaria, previa liquidación de las obligaciones pendientes con la asociación cooperativa.

Artículo 81

El fondo de reserva legal, al que se debe destinar por lo menos el 10% de los excedentes, tiene por objeto cubrir pérdidas imprevistas, debe ser permanente y no se podrá distribuir entre los asociados, ni en caso de disolución de la cooperativa. Cuando el fondo de la reserva legal equivalga a un tercio del capital suscrito actual, los incrementos posteriores, serán representados en nuevos certificados de aportación que sí se distribuirán entre los asociados, excepto en las cooperativas de autogestión. Este fondo de reserva legal podrá ser dedicado a diversas inversiones en bienes y derechos muebles e inmuebles, que por su naturaleza sean seguros, prefiriendo en primer término, operaciones financieras con los organismos superiores de integración cooperativa.

Artículo 82

La reserva de educación se destinará a sufragar, dentro de la zona de influencia de las cooperativas, campañas de divulgación de la doctrina y los métodos cooperativos, cursos de formación y capacitación cooperativa, o a impartir educación general, de acuerdo con el reglamento respectivo elaborado por el INFOCOOP.

La reserva de educación será ilimitada y para formarla se destinará por lo menos el 5% de los excedentes obtenidos.

A ellas ingresarán además los excedentes de no asociados y beneficios indirectos, así como aquellas sumas que no tuvieren destino específico, sin perjuicio de que ésta pueda incrementarse por otros medios.

Los intereses y las sumas repartibles que no fueren cobrados dentro del término de un año a partir de la fecha en que fue aprobada su distribución, caducarán a favor de la reserva de educación y reserva de bienestar social.

Artículo 83

La reserva de bienestar se destinará a sus asociados, a los trabajadores de la asociación y a los familiares inmediatos de unos y otros, para ofrecerles ayuda económica y programas en el campo de la asistencia social, especialmente para aquellos servicios que no otorgue la caja Costarricense de Seguro Social, o no estén contenidos en las disposiciones sobre riesgos profesionales. Esta reserva también será ilimitada; a su formación se destinará por lo menos un 6% de los excedentes anuales de las cooperativas, y para su uso, destino o inversión deberá contarse siempre con la aprobación de la asamblea.

Artículo 84

La asamblea podrá acordar, por mayoría simple la aprobación de convenios por medio de los que extienda la seguridad social a los asociados y caso de ser necesario, en igual forma el aumento del porcentaje destinado al fondo de bienestar social.

CAPITULO VIII

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION

Artículo 85

Las cooperativas podrán acordar su disolución por cualquiera de las siguientes causas:

- a) Por voluntad de las dos terceras partes de sus miembros;
- b) Por haber llenado su objetivo o por haber cumplido sus finalidades; y
- c) Por fusión e incorporación a otra asociación cooperativa.

Las cooperativas de autogestión para acordar su disolución deberán notificar a la Comisión Permanente de cooperativas de Autogestión la que realizará los estudios necesarios para cumplir con lo que establece el artículo 88°.

Artículo 86

Por gestión de los organismos de integración del sector, del 25% de los asociados, siempre y cuando su número no sea inferior a 10 o por iniciativa propia, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo solicitará al Tribunal de Trabajo la disolución de una cooperativa si se le comprueba en juicio que:

- a) Ha violado las disposiciones de la presente ley o sus estatutos;
- b) Ha intervenido en reuniones político-electorales; iniciado o fomentado luchas religiosas; o llevado a cabo cualquier otra actividad que no se concrete al fomento de sus intereses económicos sociales;
- c) Ha ejercido sus actividades económicas con ánimo de especulación o usura, o utilizado indebidamente los beneficios de su personalidad jurídica o las franquicias que la presente ley le otorga;
- d) Que los fines de las cooperativas o los medios que han empleado para cumplir sus objetivos, son contrarios a las leyes o las buenas costumbres;
- e) Que maliciosamente ha suministrado datos o informaciones falsas a las autoridades competentes;
- f) Que el número de asociados se ha reducido a una cifra inferior a la legal; y
- g) Por cualquier otra causa que hiciera imposible el cumplimiento de sus objetivos.

Artículo 87

El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo solicitará la disolución de aquellas cooperativas que a su juicio dejen de llenar los requisitos que para su constitución y funcionamiento señala la ley, previa consulta a los organismos de integración del sector que se trate.

Dicha petición será motivada y se presentará una vez transcurrido un plazo no menor de 15 días ni mayor de 3 meses, que se otorgará a la cooperativa a efecto de que pueda evitar su disolución corrigiendo los defectos que se le hubieran señalado.

Se entenderá que no llenan los requisitos mencionados en los siguientes casos:

- a) Cuando no pudieren iniciar su funcionamiento dentro de los 90 días siguientes a su constitución legal o no pudiere cumplir sus fines sociales;
- b) Cuando incurrieren en cualquiera de los casos previstos en el artículo 86°;
- c) Cuando el número de asociados o el patrimonio social se reduzca a un monto inferior al legal;
- d) Cuando se aparten de las normas que para la buena marcha de cada una de las clases de cooperativas, establezcan esta ley y su reglamento; y
- e) Cuando no distribuyan los saldos o excedentes o no realicen sus inversiones conforme a lo que prescribe esta ley y los estatutos.

Artículo 88

El activo líquido de la cooperativa que se disuelva, excepto en casos de fusión o incorporación a otra cooperativa, se destinará a engrosar el fondo de educación

cooperativa del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, excepto en el caso de las cooperativas de autogestión en que ingresarán al fondo de esas cooperativas.

En el caso de las cooperativas de autogestión, los activos que queden, una vez liquidados los compromisos de la cooperativa, ingresarán al fondo de esas cooperativas. La Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, decidirá el destino de dichos bienes, los cuales podrán ser arrendados o adjudicados a otras cooperativas de autogestión.

Artículo 89

Acordada u ordenada la disolución de una asociación cooperativa, ésta entrará en liquidación conservando su personalidad jurídica para esos efectos.

La liquidación estará a cargo de una comisión liquidadora, integrada por tres miembros, dos de ellos nombrados por el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo en representación del mismo y de los acreedores, y el tercero por el consejo de administración cooperativa en liquidación, y a defecto de éste por el Instituto Nacional de fomento Cooperativo, a condición de que en ambos casos el miembro nombrado sea un asociado de la cooperativa, en liquidación. El presidente de esta comisión será designado por los miembros de la misma, en su sesión primera.

Artículo 90

En caso de liquidación una vez satisfechos los gastos de tramitación, el total de los haberes sociales se destinará a cubrir los siguientes conceptos, en el orden en que ellos aparecen indicados:

- a) Cubrir los salarios y las prestaciones de sus trabajadores;
- b) Satisfacer todas las deudas de la asociación;
- c) Cancelar a los asociados el valor de sus certificados de aportación y las cuotas de inversión;
- d) Fortalecer el fondo nacional de cooperativas de autogestión en el caso de liquidación de cooperativas de ese tipo; y
- e) A distribuir entre los asociados los excedentes e intereses que pudieren haberse acumulado en el ejercicio que corría hasta el momento de declararse la liquidación en las cooperativas que no son de autogestión.

Artículo 91

Dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que se haya constituido la comisión liquidadora, ésta deberá presentar al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, el informe final de la liquidación, a efecto de que proceda a publicar la resolución en el Diario Oficial, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo podrá otorgar un nuevo plazo para el cumplimiento de la disposición anterior cuando medie causa justificada.

Artículo 92

Los miembros de la comisión liquidadora, tendrán las siguientes facultades:

- a) Concluir las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al tiempo de la disolución, cuando ello fuere legalmente posible;
- b) Cobrar los créditos y satisfacer las obligaciones de la cooperativa;
- c) Vender los bienes de la asociación por el precio autorizado, según las normas de liquidación; y
- d) Elaborar el estado final de liquidación e informarlo al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.

Artículo 93

Al concluir el trámite de liquidación a que se refiere este capítulo, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo cancelará la inscripción correspondiente y procesará a publicar en el Diario Oficial, por tres veces consecutivas, la orden de cancelación.

CAPITULO IX

DE LAS FEDERACIONES, UNIONES Y CONFEDERACIONES

Artículo 94

Las cooperativas podrán formar federaciones y uniones y tres confederaciones sectoriales, a saber: de cooperativas de autogestión; de cogestión y de las demás cooperativas. Estas confederaciones sectoriales podrán integrarse en una confederación nacional.

No se podrá formar una federación con menos de 5 cooperativas de la misma clase, ni a unión con menos de 5 cooperativas de diferente clase.

Artículo 95

Las uniones, federaciones y confederaciones tendrán como finalidad:

- a) Orientar y coordinar las asociaciones cooperativas;
- b) Empezar todas aquellas actividades económicas y financieras que tiendan a promover a sus afiliados de toda clase de bienes y servicios;
- c) Comprar y vender en común, materias primas y productos de las asociaciones afiliadas, así como adquirir los elementos necesarios para el desarrollo y expansión de las mismas; y
- d) Representar y defender los intereses de las asociaciones afiliadas.

Dos o más cooperativas podrán formar organismos cooperativos auxiliares con el propósito de realizar actividades económicas específicas. Pueden ser de carácter permanente o temporal.

Artículo 96

La constitución, administración y funcionamiento de las uniones, federaciones y las confederaciones de cooperativas se regirán por la presente ley y su reglamento y por las normas que establezcan sus propios estatutos.

CAPITULO X

DEL CONTROL Y VIGILANCIA

Artículo 97

Corresponderá el INFOCOOP, llevar a cabo la más estricta vigilancia sobre las asociaciones cooperativas, con el exclusivo propósito de que éstas funciones ajustadas a las disposiciones legales. Al efecto, permitirán la inscripción y vigilancia que sus funcionarios practiquen en dichas asociaciones para cerciorarse del cumplimiento de esta ley, de sus reglamentos y leyes conexas y darles la información indispensable que con ese objeto soliciten.

Artículo 98

Las asociaciones cooperativas que existan en el país, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Llevar un libro de actas, registros de asociados y de contabilidad en idioma español, debidamente sellados y autorizados por el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo;

- b) Proporcionar al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, dentro de los 15 días siguientes a la elección los cambios ocurridos en los órganos administrativos; y
- d) Iniciar dentro de los 15 días siguientes a la celebración de la asamblea que acordó reformar los estatutos los trámites necesarios para su aprobación legal.

CAPITULO XI

DE LAS COOPERATIVAS DE AUTOGESTION

Artículo 99

Las cooperativas de autogestión son aquellas empresas organizadas para la producción de bienes y servicios, en las cuales los trabajadores que las integran dirigen todas las actividades de las mismas y aportan directamente su fuerza de trabajo, con el fin primordial de realizar actividades productivas y recibir, en proporción a su aporte de trabajo, beneficios de tipo económico y social.

Las unidades de producción destinadas al funcionamiento de éstas, estarán bajo el régimen de propiedad social con carácter indivisible.

Artículo 100

Los objetivos de las cooperativas de autogestión son:

- a) Propiciar el pleno desarrollo del hombre al ofrecer un mecanismo de participación organizada para los trabajadores del país, en: la producción de bienes y servicios, la toma de decisiones y el reparto de los beneficios económicos-sociales, producto del esfuerzo común;
- b) Agrupar a los trabajadores en organizaciones productivas estables y eficaces en las que prive el interés comunitario;
- c) Fortalecer la democracia costarricense al promover un progresivo acceso de los trabajadores a los medios de producción, a los instrumentos de trabajo y a la riqueza socialmente producida;
- d) Crear, mediante el adecuado uso de los excedentes económicos nuevas fuentes de empleo y facilitar el acceso a los diferentes servicios sociales;
- e) Crear condiciones aptas para desarrollar economías de escala con la integración vertical y horizontal del proceso productivo, sin que ello signifique el concentrar la renta y la capacidad de decidir;
- f) Capitalizar un porcentaje de los excedentes generados, no sólo para el desarrollo de las propias empresas, sino también para la generación de nuevas unidades productivas de semejante vocación y naturaleza, contribuyendo así, a crear nuevos puestos de trabajo y bienestar general;
- g) Promover la capacitación y la educación integral de sus trabajadores y sus familiares. Dicha capacitación deberá ser orientada, en lo fundamental, a que los trabajadores asimilen sucesivos niveles de conocimiento y destrezas para afianzar la gestión democrática y eficiente de sus empresas; y
- h) Auspiciar formas de colaboración y asociación con otras cooperativas y organizaciones en el ámbito nacional y regional, para la gestión y prestación de servicios mutuos o comunes; en orden a constituir un sector diferenciado de la economía nacional.

Artículo 101

Además de los privilegios que se establecen en el artículo 6 de la presente ley, las cooperativas de autogestión gozarán también de exoneración del impuesto de consumo, ventas y estabilización económica, en la adquisición de todos los elementos materiales que necesiten para desarrollar la producción.

Artículo 102

Las empresas podrán constituirse con bienes o tierras aportadas por sus socios:

- a) En el caso de socios que posean bienes de producción de los cuales se derive su subsistencia, deben entregarlos en calidad de donación o venta a la empresa o al Consejo Nacional de Cooperativas para ser utilizadas de acuerdo a lo que disponga la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, de acuerdo con lo pactado;
- b) El hecho de dar una donación no implica privilegio alguno para el socio respecto de la empresa;
- c) En caso de aporte o venta, la asamblea general decidirá el valor de los bienes de acuerdo con el asociado, o por medio de un avalúo hecho por la Dirección General de Tributación Directa cuando se trate de un inmueble, o de un perito que facilitará el Estado por medio de sus instituciones, cuando se trate de otra clase de bien.
- d) Cuando los bienes que se entregan a la empresa no tienen el mismo valor, los asociados pueden acordar una donación o aporte igualitario, las diferencias serán tratadas como se establece en el inciso c).

Artículo 103

El Estado o cualquiera de sus instituciones podrá conceder en usufructo, en arriendo simbólico o donar al Consejo Nacional de cooperativas, para ser utilizados de acuerdo a las políticas de la comisión Permanente de cooperativas de Autogestión o a las cooperativas de este tipo, toda clase de bienes de producción. Concederá además del usufructo sobre los bienes el derecho de hipotecar al Sistema Bancario Nacional o al Fondo de Cooperativas de Autogestión los bienes objeto del usufructo, quedando a cargo de la cooperativa la deuda contraída por ese concepto. El límite de la hipoteca no podrá ser menor del 75% del valor tasado del inmueble, si así lo requieren las necesidades de la cooperativa:

- a) En el momento en que el Consejo Nacional de Cooperativas o alguna cooperativa tenga en usufructo o en arrendamiento un bien, el estado o sus instituciones no podrán vender dicho bien, mientras esté vigente el respectivo contrato.
- b) El consejo o la cooperativa que arrienda o usufructa el bien, tendrá prioridad de compra por el valor tasado al momento de iniciado el usufructo.

Artículo 104

Está prohibido a las cooperativas de autogestión:

- a) Aceptar trabajadores asalariados que no sean miembros de la cooperativa; se exceptúan: el gerente; el personal técnico y administrativo especializado, cuando sus socios no estén en capacidad de desempeñar estos cargos y si dicho personal no desea formar parte de la cooperativa.

Los trabajadores temporales que sea imprescindible contratar en períodos críticos de alta ocupación, principalmente cuando los productos o subproductos corran riesgo de perderse.

Los candidatos a asociados durante un período de prueba no mayor de tres meses.

- b) Aceptar un número mayor de socios cuando la cantidad de tierra o de otros recursos productivos de los que dispone, no lo permita, a juicio de la asamblea.
- c) Distribuir individualmente el patrimonio social de la cooperativa.

Artículo 105

El grupo que inicia la constitución de una cooperativa de autogestión debe estar integrado por personas con las siguientes características:

- a) Que deriven su subsistencia del trabajo ya sea en condición de asalariado o de trabajadores por cuenta propia.

b) Que no posean bienes de capital o en casos de poseerlos que sea en cantidades insuficientes a juicio de la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión en cuyo caso deben ajustarse a lo dispuesto en el artículo 102 de la presente ley.

Artículo 106

El consejo de administración será electo por la asamblea general y sus miembros estarán en sus cargos por un período de dos años, pudiendo ser reelectos consecutivamente por una sola vez.

Artículo 107

Los comités de trabajo son organismos especializados para la producción de bienes y servicios, los cuales se establecerán de acuerdo a las actividades y a los estatutos de la cooperativa, formados por todos los trabajadores que participen en cada actividad productiva.

Artículo 108

Son derechos de los asociados de las cooperativas de autogestión:

a) recibir una remuneración no inferior al salario mínimo fijado para las distintas actividades que rigen para las empresas privadas. Cada cooperativa deberá fijar en sus estatutos la relación entre la remuneración máxima y mínima de que disfrutarán sus socios, la cual no será en ningún caso superior a diez.

La fijación anual de las remuneraciones deberá ser aprobada por la asamblea general de asociado y remitida luego a la Comisión Permanente de cooperativas de Autogestión para su aprobación final.

b) Participar en la aprobación de los planes de producción de la empresa, en la planificación del desarrollo económico y social de la misma, así como en la aprobación de la distribución social e individual de los excedentes no fijados en esta ley.

c) Examinar, por medio del comité de vigilancia, la contabilidad, libros, actas y en general, todos los documentos de la empresa y recibir la información correspondiente.

d) Disfrutar de protección para sí, y para sus familiares en caso de incapacidad, vejez o muerte del asociado.

Artículo 109

Son obligaciones de los socios:

a) Aportar a la empresa su trabajo personal en forma directa.

b) Asistir a las asambleas generales y participar activamente en sus deliberaciones y resoluciones.

c) Capacitarse, teniendo en cuenta las necesidades de la empresa y transmitir a los demás socios los conocimientos o habilidades adquiridos.

d) Practicar la solidaridad con los demás miembros de la empresa y sus familiares.

e) Cumplir las disposiciones de la presente ley, su reglamento y los estatutos de la cooperativa, así como las resoluciones de la asamblea, comités, comisiones y grupos de trabajo, establecidos de conformidad con las disposiciones legales.

Artículo 110

Queda prohibido a los socios de las cooperativas de autogestión:

a) Dedicarse en forma directa o indirecta a actividades que compitan con las actividades de la cooperativa. La producción de subsistencia en parcelas o huertas familiares, que se destine al consumo directo de la familia del asociado, no se considera competitiva.

b) Pertenecer a dos o más cooperativas de autogestión.

c) Designar reemplazante, asalariado o no, para su trabajo en la cooperativa.

d) Negar su concurso oportuno a las actividades de la empresa cuando ésta lo requiera. El reglamento establecerá las sanciones aplicables a las violaciones de este artículo.

Artículo 111

Las cooperativas de autogestión podrán formar uniones, federaciones y una confederación de cooperativas de autogestión. Las características de su constitución y organización se estipularán en el reglamento de la presente ley.

Artículo 112

Los empleados, trabajadores temporales hijos de los socios, mayores de 15 años, de las empresas cooperativas de autogestión gozarán de prioridad para ser admitidos en ellas como socios regulares.

Artículo 113

Los estatutos de cada cooperativa definirán los procedimientos de sustitución y selección de nuevos asociados.

Artículo 114

Los excedentes netos deberán destinarse:

a)Obligatoriamente:

- 1) El 10% a constituir la reserva legal.
 - 2) Por lo menos el 6% para el fondo de bienestar social.
 - 3) Un mínimo de 15% a realizar inversiones productivas que amplíen la capacidad económica de la empresa, siempre y cuando las inversiones cumplan con lo que establezca el reglamento de inversiones que elaborará la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión. En caso de que no se realice la inversión, estos pasarán a reforzar el fondo nacional de cooperativas de autogestión para ser destinado a inversiones en empresas cooperativas de autogestión. la empresa recibirá la tasa de interés que la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión previa consulta con el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, fije para estos efectos. El porcentaje destinado a las inversiones productivas será representado por certificados de aportación distribuidos entre los socios en proporción a sus aportes en trabajo.
 - 4) El 4% a la formación de un fondo para la promoción y capacitación de empresas cooperativas de autogestión, que será manejado por la comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión.
 - 5) El 5% se destinará al fortalecimiento del fondo nacional de cooperativas de autogestión.
 - 6) El 5% para el financiamiento de las uniones, federaciones y confederaciones.
 - 7) El 1% para el Consejo Nacional de Cooperativas.
- b) Por decisión de la asamblea:
- 8) Distribuir el saldo entre los socios en proporción a su aporte del trabajo, para lo cual la empresa llevará un control de las horas trabajadas por sus socios, sirviendo dicho control de base para la distribución de los excedentes entre los mismos, según los estatutos de la empresa.
 - 9) Cualquier otro fin establecido en los estatutos o que determine la asamblea.

Artículo 115

El Gobierno Central, organismos públicos descentralizados, el Sistema Bancario Nacional e instituciones financieras en que tenga participación el Estado, apoyarán con prioridad la constitución y desarrollo de cooperativas de autogestión.

Artículo 116

La institución promotora o el Estado, quedan facultados para dar el aval correspondiente, a las cooperativas de autogestión, cuando sea necesario para la obtención de financiamiento.

Artículo 117

Las oportunidades de inversión que surjan como consecuencia de la existencia de actividades económicas reservadas al Estado, podrán desarrollarse, preferentemente por cooperativas de autogestión o de cogestión entre el estado y los trabajadores.

Artículo 118

La Oficina de Planificación Nacional y Política económica, a través del fondo de preinversión u otros fondos, destinados a propósitos similares, dispondrá recursos para el financiamiento, en condiciones preferenciales, de los estudios necesarios para la constitución de cooperativas de autogestión.

Artículo 119

Corresponde a la Oficina de Planificación Nacional y Política Económica, la planificación y la coordinación interinstitucional de los esfuerzos, apoyo y asesoría de las instituciones del estado a las cooperativas, por medio de la creación de un subsistema para dicho sector.

CAPITULO XII**DE LAS COOPERATIVAS DE COGESTION****Artículo 120**

Las cooperativas de cogestión son aquellas en las que la propiedad, la gestión y los excedentes son compartidos entre los trabajadores y los productores de materia prima, entre el estado y los trabajadores o entre los trabajadores, los productores de materia prima y el Estado.

Artículo 121

Las cooperativas de cogestión tienen por objetivo la producción y transformación de bienes o la prestación de servicios con la participación directa de los trabajadores y los productores de materia prima, del estado y los trabajadores o de los trabajadores, los productores de materia prima y el Estado. Este tipo de cooperativas se regirán por lo dispuesto en la presente ley para los otros tipos de cooperativas excepto en lo referente a la representación de los diferentes sectores que integren la cooperativa en los cuerpos directivos, la propiedad y la distribución de los excedentes, para lo cual se regirán por lo establecido en el presente capítulo y en el reglamento correspondiente.

Artículo 122

En las cooperativas de cogestión entre el estado y los trabajadores, el porcentaje de los excedentes que corresponde a los trabajadores se fijará tomando en cuenta: la rentabilidad de la empresa, el valor agregado por el factor trabajo y las inversiones efectuadas por el Estado y por los trabajadores. En el caso de empresas y existentes en manos del Estado cuyos excedentes estén financiando otras actividades de éste y que se transformen en cooperativas de cogestión Estado- trabajadores, deberá tomarse en cuenta además las necesidades que el estado estuviera cubriendo con el producto de la operación de la empresa. El porcentaje de los excedentes que corresponda a los

trabajadores deberá distribuirse entre todos los trabajadores, incluidos los trabajadores temporales cuya parte correspondiente del porcentaje de dicho excedente, se calculará con base en el trabajo aportado.

Artículo 123.- Para que a unacooperativa se le considere como cooperativa de cogestión entre productores de materia prima y trabajadores, son requisitos indispensables:

- a) Que por lo menos el 40% del total de los asociados sean trabajadores.
- b) Que un mínimo del 40% del total de trabajadores sean asociados a la cooperativa.
- c) Que el número de trabajadores asociados se incremente anualmente en el porcentaje que fije el reglamento de esta ley hasta alcanzar, en un período máximo de cinco años, por lo menos un 95% de los trabajadores permanentes.

Artículo 124

La Oficina de Planificación Nacional y Política Económica y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, en consulta con el Consejo Nacional de Cooperativas y las cooperativas de cogestión, reglamentarán para este tipo de cooperativas lo relacionado con la propiedad, la distribución de excedentes, la participación en la gestión y otros aspectos que se consideren necesarios, tomando en cuenta los siguientes criterios:

- a) En el caso de cooperativas de cogestión Estado- trabajadores la representación del estado en los órganos directivos, asamblea general y Consejo de Administración, será proporcional a la inversión realizada por éste y deberá ir disminuyendo conforme los trabajadores vayan adquiriendo las acciones en poder del Estado.
- b) En el caso de cooperativas de cogestión entre trabajadores y productores de materia prima, la representación en los órganos directivos y comités de la cooperativa de cada sector (productores y trabajadores) deberá ser proporcional al porcentaje que del total de asociados represente cada sector, a las aportaciones hechas por cada sector y a las operaciones que cada sector realice con la cooperativa.
- c) Para la distribución de excedentes en cooperativas de cogestión productores-trabajadores se tomará en cuenta el monto de las aportaciones hechas por cada sector y el volumen de operaciones realizadas por cada sector con la cooperativa; esto último en el caso de los trabajadores, estará constituido por el valor agregado por el factor trabaja y en el de los productores por el total del insumo entregado a la cooperativa.

Artículo 125

Las cooperativas de cogestión además de los privilegios que confiere esta ley en el artículo 6º a las demás cooperativas, disfrutarán de exención de impuesto de consumo y ventas en proporción al porcentaje de asociados trabajadores que tenga la cooperativa y al porcentaje de los excedentes que entregue a los trabajadores, según una tabla que al respecto establecerá el reglamento mencionado en el artículo anterior.

Artículo 126

Una suma correspondiente al 50% del beneficio directo obtenido por la exención de impuestos a que se refiere el artículo anterior se deberá separar anualmente de los excedentes totales obtenidos por la cooperativa para constituir una reserva anual que deberá destinarse a:

- a) Financiar las cuotas y cualquier otro tipo de requisito de ingreso de los trabajadores como asociados de la cooperativa.
- b) El remanente de la reserva al final del ejercicio económico del período se destinará a incrementar los excedentes que correspondan a los trabajadores.

Artículo 127

Las cooperativas de cogestión nombrarán en asamblea que se efectuarán anualmente, una comisión supervisora integrada por diez miembros, cinco del sector de productores de materia prima y cinco de los trabajadores, la cual tendrá a su cargo la fiscalización de la participación en la gestión y la distribución de los excedentes en las cooperativas de cogestión, así como cualquier otra función que se le asigne por reglamento.

El reglamento establecerá los mecanismos de integración de la asamblea conservando la paridad entre los representantes de los trabajadores y de los productores de materia prima.

En caso de determinarse la existencia de violaciones al reglamento, la comisión notificará al departamento de Supervisión del INFOCOOP, para que proceda conforme a la ley.

Artículo 128

El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo asumirá responsabilidad de controlar anualmente lo dispuesto en el artículo 124 para lo cual llevará un registro actualizado con la información necesaria. En caso de incumplimiento por parte de la cooperativa de cualquiera de los incisos a), b) ó c), del mencionado artículo, ésta perderá su condición de cooperativa de cogestión y dejará de disfrutar de los privilegios que le confiere la presente ley a ese tipo de cooperativas. El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo procederá a reclasificarla o a disolverla según sea el caso.

Artículo 129

El Instituto Nacional de fomento Cooperativo deberá presentar anualmente al Ministerio de Hacienda el informe correspondiente a cada una de las cooperativas de cogestión con el objeto de que el Ministerio proceda a conceder los porcentajes de exención del impuesto de consumo y de ventas que correspondan a cada cooperativa.

En el caso de incumplimiento por parte de una cooperativa de lo establecido en este capítulo, INFOCOOP informará al Ministerio de hacienda, quien procederá a cancelar los beneficios adicionales que esta ley establece para este tipo de cooperativas.

Artículo 130

Los trabajadores de cualquier cooperativa de producción de bienes podrán solicitar su ingreso como asociados de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de esta Ley. Cuando por lo menos un 60% del total de trabajadores de una cooperativa, asociados o no, solicite al INFOCOOP la transformación de una cooperativa de cogestión, el INFOCOOP deberá efectuar los estudios correspondientes para determinar la viabilidad, posibilidad y utilidad de la transformación. En caso de que los resultados del estudio sean favorables a juicio del INFOCOOP, será obligatorio para la cooperativa su transformación en cooperativa de cogestión.

CAPITULO XIII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 131

Los casos no provistos en la presente ley, en la escritura social o en los estatutos de la respectiva asociación, se resolverán de acuerdo con los principios que se deriven de esta ley, en su defecto por los principios generales del derecho cooperativo, y finalmente por las regulaciones del Código de Trabajo, del Código de comercio y del Código Civil que por su naturaleza o similitud, puedan ser aplicables a estas asociaciones, siempre que no contravengan los principios, la doctrina y la filosofía cooperativas.

Artículo 132

El Banco Nacional de Costa Rica, por medio de sus departamentos de crédito, y los demás bancos del Sistema Bancario Nacional, podrán conceder créditos de mediano y largo plazo a las cooperativas formadas por asociados de escasos recursos, para que puedan hacer efectiva la inscripción de sus certificados de aportación en tales cooperativas.

Artículo 133

Los Tribunales de Trabajo, salvo los casos expresamente señalados en esta ley, tendrán competencia sobre las acciones que se deriven de ella, de conformidad con lo dispuesto en el título VII, del capítulo I del Código de Trabajo.

Artículo 134

Refórmense los artículos 1 y 3 de la Ley N° 2634 del 20 de setiembre de 1960 (Cooperativa para operación del Matadero Nacional de Montecillos) para que se lean así:

"Artículo 1

Inciso a) La cooperativa será administrada por un Consejo de Administración compuesto por 7 miembros, seis de los cuales serán nombrados por la asamblea de asociados de la cooperativa y uno por el Consejo Nacional de Producción en tanto éste tenga en su poder acciones de la cooperativa".

"Artículo 3

Cuando los asociados de la cooperativa y el Consejo Nacional de Producción así lo acuerden el Consejo Nacional de Producción deberá y cediendo a ellos sus acciones mediante el pago de las mismas por su valor nominal".

Artículo 135

Agréguese el artículo 5° de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de vivienda y Urbanismo, con los incisos que se leerán así:

"p) Dar asesoría a las cooperativas de vivienda y a las de ahorro que efectuar en préstamos para vivienda, cuando éstas lo soliciten, colaborando en la vigilancia de la construcción, según sus propias normas y especificaciones".

"q) Entrar en diversos arreglos con las cooperativas citadas en el inciso anterior para el mejor beneficio de sus objetivos comunes".

TITULO II**DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS****CAPITULO UNICO****Artículo 136**

El Consejo Nacional de Cooperativas, cuyo nombre podrá abreviarse "CONACOO", es un organismo de delegados del sector cooperativo, que elige a los representantes del movimiento en la Junta Directiva del Instituto, vigila su actuación y da normas sobre la

política a seguir. Tendrá personería jurídica propia con carácter de ente público no estatal. Se financiará hasta con el 2% de los excedentes líquidos de las cooperativas, al cierre de cada ejercicio económico y con los recursos que puedan adquirir por diferentes vías.

En el caso de cooperativas que formen parte de una unión o federación el aporte será del 1%. El 1% restante lo recibirán las uniones y federaciones para el fomento de nuevas cooperativas. las cooperativas de autogestión se regirán por lo dispuesto en el artículo 114 de esta ley.

El Consejo Nacional de cooperativas gozará de las mismas exenciones que la presente ley le otorga al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.

Artículo 137

Las funciones del Consejo Nacional de cooperativas son:

- a) Aprobar los reglamentos internos para su funcionamiento.
- b) Elegir y remover en su caso los representantes del sector cooperativo en la Junta Directiva del Instituto;
- c) Actuar como cuerpo representativo de las asambleas y nombrar su secretario ejecutivo;
- d) Sesionar ordinariamente una vez cada tres meses;
- e) Cumplir las disposiciones y resoluciones del Congreso Anual Cooperativo;
- f) Servir de organismo consultor para el INFOCOOP;
- g) Servir de mediador en las diferencias que puedan suscitarse entre la Junta Directiva, la dirección Ejecutiva y las cooperativas del país;
- h) Propiciar el acercamiento y las mejores relaciones entre los diferentes sectores y entidades cooperativas superiores;
- i) Convocar y presidir las asambleas generales a que se refiere el artículo 140.

Artículo 138

El Consejo Nacional de Cooperativas elegirá de su seno un presidente, un vicepresidente, un secretario y dos vocales, de tal suerte que representen los intereses de los tres sectores. La asamblea se reunirá ordinariamente por lo menos cada tres meses y extraordinariamente cuando sea convocada por el presidente o por 10 delegados. El quórum lo formará la mitad más uno de los delegados.

Artículo 139

El Consejo Nacional de Cooperativas será integrado con el siguiente procedimiento:

- a) Se harán tres asambleas: una de las cooperativas, otra de las cooperativas de producción agrícola e industriales y una tercera de las demás cooperativas;
- b) Cada cooperativa de primer grado, con el voto de los miembros de su consejo de administración, y de los demás comités establecidos por sus estatutos, enviará un asociado como delegado ante la Asamblea que le corresponda, según la clasificación oficial que hará el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo;
- c) En las asambleas a que se refiere el inciso a) de ese artículo cada delegado tendrá derecho a un voto y no se admitirá voto por poder;
- d) El quórum de estas asambleas será de la mitad más uno de los delegados y, si una hora después de la fijada para la reunión no se hubiera completado este número, se procederá válidamente a la asamblea con la asistencia del 20% del número total de delegados;
- e) Cada una de las asambleas a que se refiere el inciso a) de este artículo elegirá diez representantes. La tercera asamblea o sea la de las demás cooperativas también elegirá diez representantes por ninguno de los sectores que la integren podrá elegir a más de tres representantes;

- f) Las federaciones y uniones a nivel nacional, designarán libremente cada una, un representante ante el Colegio Nacional de cooperativas; y
- g) Es deber del presidente del Consejo Nacional de cooperativas convocar a las cooperativas para las asambleas mencionadas en los incisos anteriores y pedir a las uniones, federaciones y confederaciones la designación de sus representantes con treinta días de anticipación.

Las asambleas de los delegados de las cooperativas para elegir representantes para formar el Consejo nacional de Cooperativas y el nombramiento que hagan las federaciones, uniones y confederaciones deben realizarse cada dos años.

Artículo 140

Los 10 representantes de las cooperativas de autogestión ante el Consejo Nacional de Cooperativas constituirán la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, la cual tendrá las funciones y atribuciones que esta ley le confiere, a saber:

- a) Servir de organismo representativo, coordinador y asesor de las cooperativas de autogestión;
- b) Definir las políticas de administración del Fondo Nacional de Cooperativas de Autogestión y elaborar los reglamentos de funcionamiento y uso de dicho Fondo;
- c) Velar por la creación, ampliación, diversificación y modernización de las cooperativas de autogestión;
- d) Estar vigilante para que las empresas cooperativas de autogestión cumplan con todo lo estipulado en la presente ley y su reglamento;
- e) Coordinar y canalizar la colaboración que prestarían los organismos nacionales e internacionales, para con las empresas cooperativas de autogestión, tanto en el campo de la asistencia técnica, financiera, de capacitación, organización y cualquiera otra necesidad de dichas empresas;
- f) Estar vigilante para que las empresas cooperativas de autogestión cumplan con todo lo estipulado en la presente ley y su reglamento;
- g) Procurar la capacitación, la asistencia técnica y el apoyo financiero a las cooperativas de autogestión, confederaciones, federaciones y uniones afiliadas, para lo cual definirán políticas correspondientes;
- h) Solicitar al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo informes detallados del uso del Fondo de Cooperativas de Autogestión;
- i) Seleccionar y nombrar al personal que requiera a través del CONACOOOP; y
- j) Ejercer las demás funciones de conformidad con la ley y su reglamento.

La Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión podrá sesionar con la mitad más uno de sus miembros. De su seno nombrará un directorio compuesto por lo menos por un presidente, un secretario y un vocal.

Artículo 141

Para la elección de representantes a la Junta Directiva del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, cada uno de los sectores representados en el consejo Nacional de Cooperativas presentará una terna a conocimiento del plenario; de estas ternas se elegirá un representante de cada sector. El cuarto representante se elegirá libremente de cualquiera de los tres sectores.

Artículo 142

Créase el Fondo Nacional de cooperativas de Autogestión para financiar las actividades propias del desarrollo de dichas cooperativas.

Con este fin, el Estado a través del Ministerio de Hacienda y el presupuesto nacional, efectuará transferencia al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo en el siguiente ejercicio fiscal a partir de la promulgación de la ley por una suma inicial de 20 millones de colones y 20 millones de colones durante cuatro años sucesivos, al término de los cuales deberá haber aportado la suma total de 60 millones de colones.

Del Fondo Nacional el Instituto Nacional de fomento Cooperativo girará al Consejo Nacional de Cooperativas una suma no mayor de 10% de los ingresos anuales, de dicho fondo, para cubrir los gastos administrativos de la Comisión Permanente de Cooperativas d Autogestión en el cumplimiento de sus funciones.

Las posibles remanentes anuales al liquidar el presupuesto se reintegrarán al Fondo.

Artículo 143

La administración financiera del Fondo Nacional de cooperativas de Autogestión estará a cargo del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, de acuerdo con las políticas y reglamentos elaborados por la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión. Los gastos de administración de este fondo serán pagados al costo mínimo por el Consejo Nacional de Cooperativas de la partida que se señala en el artículo anterior.

La Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión podrán solicitar al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo informes detallados del manejo del Fondo Nacional de cooperativas de Autogestión.

En caso de divergencia ente la Comisión Permanente de Autogestión y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, originada en la interpretación de las políticas y reglamentos elaborados por la Comisión, la diferencia será resuelta por el directorio del Consejo Nacional de Cooperativas.

Artículo 144

El Consejo Nacional de Cooperativas, a solicitud de la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión podrá obtener recursos del Fondo Nacional de Cooperativas de Autogestión con el propósito de destinarlos a la compra de equipo fijo y tierras, a fin de que puedan ser arrendados a empresas cooperativas de autogestión para atenuar costos y riesgos en dichas empresas.

Artículo 145

Las solicitudes de crédito de las cooperativas de autogestión a financiarse con el Fondo las resolverá una comisión integrada por el representante de las cooperativas de autogestión en la Junta directiva del Instituto Nacional de fomento Cooperativo, un miembro nombrado por la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión y un representante del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo que será técnico en el estudio y tramitación de créditos.

Esta comisión será responsable del otorgamiento de los créditos y todas sus actuaciones relacionadas con el otorgamiento de los mismos.

Artículo 146

Una vez descontados de los excedentes los porcentajes que fija la presente ley y los estatutos de cada cooperativa de autogestión, el resto de los recursos deberán ser depositados en el Fondo Nacional de Empresas de Autogestión.

Dichos recursos se emplearán en la consolidación del sector, recibiendo una tasa de interés anual, igual a la fijada por el reglamento de administración del fondo para el financiamiento de las cooperativas de autogestión.

Estos depósitos que hagan las empresas cooperativas podrán servir para realizar operaciones de garantía. Cuando la empresa requiera de dichos recursos, el fondo

deberá proveerlos de acuerdo con lo que al respecto establezca el reglamento de administración del mismo.

Artículo 147

Como apoyo al Fondo Nacional de Empresas cooperativas de Autogestión, el Sistema Bancario Nacional, en su programa crediticio anual, asignará para el financiamiento de las empresas cooperativas de autogestión, un monto no menor del 1% del total de su carera de crédito. Para tal efecto el Banco Central deberá incluirlo dentro de sus políticas crediticias y los bancos estarán obligados a acatarlas.

Corresponderá a la Auditoría General de bancos velar por el fiel cumplimiento de esa disposición.

Artículo 148

El Fondo financiará la constitución de cooperativas de autogestión mediante aportes iniciales, los cuales pueden contemplar, según el caso: la adquisición de bienes de capital, inmuebles, gastos de constitución, recursos operativos iniciales, etc. Si la constitución de la cooperativa hubiere demandando el realizar un estudio de factibilidad, el costo del mismo irá incluido en el aporte inicial. Se podrá destinar hasta un 5% de los ingresos anuales del Fondo para el pago de estudios de preinversión no reembolsables.

Artículo 149

El aporte inicial que haga el Fondo para constituir empresas cooperativas de autogestión, será reembolsado por las mismas empresas cooperativas en un plazo que será convenido en cada caso, teniendo en cuenta la rentabilidad estimada para la cooperativa según el estudio de factibilidad elaborado para obtener el financiamiento de la misma.

Artículo 150

El fondo deberá cobrar una tasa de interés por el financiamiento requerido. El monto de dicha tasa variará según los siguientes factores:

- a) Rentabilidad prevista para la cooperativa; y
- b) Economías externas o ventajas comparativas que pudiera tener la empresa cooperativa por su localización geográfica.

Estos aspectos deben contemplarse en el reglamento de manejo y administración del fondo que debe ser elaborado por la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión.

Artículo 151

La Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión por propia iniciativa, o a solicitud de las empresas cooperativas podrá reajustar los plazos y tasas de interés convenidos al momento de conceder los aportes iniciales, si el comportamiento de las empresas o los factores externos ameritan que se realice el reajuste.

En tal caso la comisión de crédito y la empresa cooperativa de que se trate suscribirán un nuevo contrato.

Artículo 152

El Estado y sus instituciones, así como cualquier otro organismo nacional podrá donar, traspasar, arrendar o dar en usufructo a la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión por medio del Consejo Nacional de Cooperativas o a las cooperativas afiliadas, recursos, siempre y cuando sean para coadyuvar a la consolidación del sector y al cumplimiento de las disposiciones que establece esta ley y su reglamento.

Artículo 153

Cuando una empresa de cualquier tipo quiebre, la comisión o trabajadores organizados bajo los principios autogestionarios podrán previo estudio de factibilidad y con autorización de la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, asumir la administración y manejo temporal de la empresa y la adquisición de sus fines con recursos del Fondo Nacional de Empresas Cooperativas de Autogestión, sin contravenir esta ley y su reglamento.

TITULO III**DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO****CAPITULO I****SU CREACION Y FINES****Artículo 154**

Créase una institución denominada Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, cuyo nombre podrá abreviarse INFOCOOP, el cual tendrá personería jurídica propia, administrativa y funcional. El domicilio legal del Instituto es la ciudad de San José y podrá establecer agencias en otros lugares del país.

Artículo 155

El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, INFOCOOP, tiene como finalidad: fomentar, promover, financiar, divulgar y apoyar el cooperativismo en todos los niveles, propiciando las condiciones requeridas y los elementos indispensables, a una mayor y efectiva participación de la población del país, en el desenvolvimiento de la actividad económico-social que simultáneamente contribuya a: crear mejores condiciones de vida para los habitantes de escasos recursos, realizar una verdadera promoción del hombre costarricense y fortalecer la cultura democrática nacional.

Artículo 156

Con miras a realizar los objetivos descritos en el artículo anterior, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo funcionará como institución de desarrollo cooperativo, orgánicamente estructurado en la forma en que la Junta directiva lo disponga. El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo podrá realizar toda clase de operaciones crediticias y redescuentos en beneficio y servicios de las cooperativas del país, nato a nivel nacional como internacional, lo mismo que la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional autoriza para los bancos comerciales del estado, quedando el banco Central facultado por la presente ley para dictar y establecer la reglamentación pertinente, a fin de poner en vigencia la presente disposición.

Artículo 157

Para el cumplimiento de sus propósitos el Instituto Nacional de fomento Cooperativo tendrá las siguientes funciones y atribuciones de carácter general:

- a) Promover la organización y desarrollo de toda clase de asociaciones cooperativas;
- b) Fomentar la enseñanza y divulgación del cooperativismo en todas sus formas y manifestaciones, para lo cual establecerá con preferencia cursos permanentes sobre doctrina, administración, contabilidad, gerencia y toda actividad educativa, que promueva un verdadero espíritu cooperativista nacional;
- c) Prestar asistencia técnica a las asociaciones cooperativas en cuanto a estudios de factibilidad, ejecución y evaluación de programas;

- d) Conceder crédito a las asociaciones cooperativas en condiciones y proporciones especialmente favorables al adecuado desarrollo de sus actividades, percibiendo por ello, como máximo, los tipos de interés autorizados por el Sistema Bancario Nacional;
- e) Servir a las cooperativas y a los organismos integrativos como agente financiero y avalar cuando sea necesario y conveniente, los préstamos que aquellos contraten con entidades financieras nacionales o extranjeras.
- f) Promover y en caso necesario participar, en la formación de empresas patrimoniales de interés público, entre las cooperativas, las municipalidades y entes estatales, conjunta o separadamente, tratando siempre de que en forma gradual y coordinada, los certificados de aportación pasen a manos de los cooperadores naturales;
- g) Obtener empréstitos nacionales y extranjeros con instituciones públicas, y gestionar la participación económica de las entidades estatales que corresponda, para el mejor desarrollo del movimiento cooperativo nacional;
- h) Participar como asociado de las cooperativas cuando las circunstancias así lo demanden, previa solicitud de la asamblea de la cooperativa respectiva y estudio de factibilidad del INFOCOOP para determinar la importancia del proyecto. En aquellas cooperativas que tengan menos de cuatro años de existencia y en las cuales el aporte de capital del Instituto sea superior a un 60% del capital social de la cooperativa, el Instituto podrá nombrar y remover al gerente. Esta designación tendrá un plazo máximo de cinco años.
- i) Promover la integración cooperativa tanto en el país como fuera de él, a fin de lograr el fortalecimiento y desarrollo cooperativo a través de organismos superiores;
- j) Recibir préstamos del Banco Central de Costa Rica y redescantar en éste documentos de créditos, ajustándose a los mismos requisitos que se aplican a los bancos comerciales para todas las operaciones;
- k) Realizar investigaciones en diferentes ramas cooperativas económicas y sociales tendientes a ir diseñando un eficiente sector cooperativo en la economía nacional;
- l) Llevar una estadística completa del movimiento cooperativo nacional, mantener un activo intercambio de informaciones y experiencias entre todas las cooperativas y proporcionar a entidades nacionales e internacionales, información relacionada con el movimiento cooperativo; nacional.
- m) Colaborar con la Oficina de Planificación en la elaboración de los planes de desarrollo nacional; asimismo con todas las instituciones públicas en los programas que promuevan a las cooperativas dentro del espíritu del artículo 1 de esta ley;
- n) Servir como organismo consultivo nacional en materias relacionadas con la filosofía, doctrina y métodos cooperativistas.
- ñ) Evacuar las consultas ordenadas por la Constitución Política sobre proyectos de ley, que guarden relación con las asociaciones cooperativas;
- o) Revisar los libros de actas y contabilidad de todas las cooperativas y realizar un auditoraje por lo menos cada dos años, o cuando las circunstancias lo ameriten, o así lo soliciten sus cuerpos representativos;
- p) Solicitar y recibir informes estadísticos u otros datos sobre la marcha de cualquier cooperativa;
- q) Ejercer todas las demás funciones, facultades y deberes que le corresponden de acuerdo con esta ley y la naturaleza de su finalidad; y
- r) El INFOCOOP, en materia de servicios a cooperativas primarias que formen parte de organismos de segundo grado deberán coordinar con éstos lo relativo a dichos servicios.

Artículo 158

El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo tendrá derecho a las siguientes exenciones y franquicias:

- a) Exención total de toda clase de impuestos, derechos de registro, tasas y contribuciones fiscales y municipales, establecidas o que se establezcan y que puedan pesar sobre sus bienes, derechos o acciones, rentas o ingresos de cualquier clase o sobre los actos jurídicos, contratos o negocios que celebre;
- b) Exención total de toda clase de impuestos, tasas y contribuciones, fiscales y municipales, sobre la emisión, suscripción, negociación, cancelación de capital e intereses y bonos, certificados, títulos o valores emitidos por el INFOCOOP; Y
- c) Franquicia postal, telegráfica y radiográfica con servicios especiales para las comunicaciones entre el Instituto y las cooperativas y demás entidades estatales.

Artículo 159

El INFOCOOP tendrá prioridad para la compra directa a los bancos comerciales del estado, sin el requisito previo de licitación y demás disposiciones legales vigentes, de fincas, bienes, muebles e inmuebles, empresas procesadoras de productos agrícolas, industriales y artesanales, para efectos de su cooperativización; en estas operaciones los bancos darán un período de gracia hasta de ocho años en el pago de amortizaciones, cuando así lo requieran las circunstancias especiales y cobrará un interés no mayor del mínimo establecido para este tipo de operaciones por el Banco Central de Costa Rica.

CAPITULO II

DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION

Artículo 160

El Instituto estará regido por una Junta directiva integrada así:

- a) Un representante de la Junta Directiva del banco Nacional de Costa Rica;
 - b) Un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;
 - c) Un representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería;
 - d) Cuatro representantes de las cooperativas nombrados de conformidad con lo que establece el artículo 141 de la presente ley; y
 - e) Dos representante de los otros tipos de cooperativas, cada uno de actividad diferente.
- La Junta durará en funciones dos años y sus miembros pueden ser reelectos.

Artículo 161

para ser miembro de la Junta directiva del Instituto, es necesario:

- a) Ser costarricense por nacimiento o por naturalización, con no menos de diez años de permanencia en el país;
- b) Ser mayor de edad;
- c) tener reconocida experiencia en materia de cooperativas y la suficiente capacidad para cumplir satisfactoriamente sus funciones, y en el caso de los delegados del sector cooperativo, haber sido miembro activo o haber participado activamente en la administración de alguna asociación cooperativa, por un período no menor de tres años;+
- d) No haber sido declarado en estado de quiebra o insolvencia; y
- e) No estar ligado con otro miembro de la Junta por parentesco de consanguinidad hasta tercer grado inclusive y segundo de afinidad, ni pertenecer a la misma sociedad de nombre colectivo o de responsabilidad limitada, o que formen parte del directorio de una sociedad por acciones. Cuando con posterioridad a su nombramiento se presentare esa incompatibilidad, caducará la designación del nuevo miembro.

Artículo 162

Compete a la Junta Directiva trazar la política del Instituto, velar por la realización de sus fines y de un modo específico;

- a) Nombrar y remover al director ejecutivo, al subdirector y al auditor;

- b) Aprobar el presupuesto anual ordinario y los extraordinarios, los balances anuales y trimestrales, lo mismo que la memoria anual de la institución;
- c) Dictar los reglamentos de organización y funcionamiento del Instituto;
- d) Aprobar la escala de salarios para los empleados y funcionarios del INFOCOOP;
- e) Resolver las solicitudes de crédito que se presenten al Instituto, conforme a las normas del reglamento específico que sobre esta materia deberá dictarse;
- f) Contratar empréstitos nacionales o internacionales, para el cumplimiento de sus fines, de conformidad con lo establecido en el inciso g) del artículo 10;
- g) Autorizar la venta o gravamen de los bienes del Instituto, lo mismo que la inversión de los fondos disponibles, y aceptar transacciones y compromisos arbitrales;
- h) Adjudicar las licitaciones que promueva el INFOCOOP, las que serán apelables ante la Contraloría General de la república, quien tendrá treinta días naturales para resolverla; si en ese término no se hubiere producido la resolución, la adjudicación se considerará firme;
- i) Conocer y resolver los recursos de apelación contra los actos del director y subdirector ejecutivos y del auditor, conforme el trámite indicado en los reglamentos;
- j) Autorizar la apertura y operación de oficinas regionales subsidiarias del Instituto, cuando las circunstancias del país así lo ameriten; y
- k) Ejercer las demás funciones que le corresponden de conformidad con la presente ley y sus reglamentos.

Artículo 163

Cesará de ser miembro de la Junta Directiva:

- a) El que se ausente del país por más de un mes sin autorización de la Junta directiva, o con ella por más de tres meses;
 - b) El que sin causa justificada, a juicio de la Junta, falte a cuatro sesiones ordinarias consecutivas;
 - c) El que infrinja o consienta infracciones manifiestas a las leyes con motivo del ejercicio de su cargo;
 - d) El que por incapacidad física no haya podido desempeñar sus funciones durante seis meses; y
 - e) El que renuncie a su cargo o se incapacite legalmente para ejercerlo.
- La renuncia deberá ser presentada a la Junta Directiva para el trámite correspondiente.

Artículo 164

Las decisiones de la Junta Directiva serán tomadas por simple mayoría salvo en los siguientes casos en que se necesitará el voto favorable de por lo menos cinco de sus miembros;

- a) El nombramiento, la remoción del director ejecutivo, el subdirector y del auditor;
- b) La contratación de empréstitos y la concesión de créditos por un monto superior a un millón de colones; y
- c) La aceptación de transacciones y compromisos arbitrales.

Artículo 165

La Junta directiva sesionará ordinariamente ocho veces por mes y extraordinariamente cuando la convoque el Presidente o el Director Ejecutivo.

Sus miembros serán remunerados mediante dietas cuyo monto no será superior a ciento cincuenta colones por sesión y el número de sesiones remuneradas mensualmente no podrá exceder de doce.

Artículo 166

La administración general del INFOCOOP estará a cargo de un director ejecutivo, nombrado por la Junta Directiva, por un período de cuatro años, pudiendo ser reelecto.

Artículo 167

El nombramiento del director ejecutivo deberá recaer en persona de reconocida capacidad y probada experiencia en asuntos cooperativos.

Artículo 168

En ningún caso podrá nombrarse director ejecutivo a quien fuera miembro de la Junta Directiva o lo hubiere sido en el año anterior al nombramiento, o a personas que fueran cónyuges o parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, de cualquiera de los miembros de la Junta Directiva y del auditorio o del subdirector.

Artículo 169

Cuando las circunstancias lo aconsejen la Junta Directiva podrá nombrar un subdirector ejecutivo, quien actuará subordinado al director. En las ausencias temporales de éste, sus deberes y responsabilidades serán asumidas por el subdirector. Son aplicables al subdirector las normas sobre nombramiento y remoción, establecidas para el director ejecutivo.

Artículo 170

Son funciones que competen al director ejecutivo:

- a) Ejercer la administración general del INFOCOOP, conforme a las disposiciones legales, reglamento del mismo y los mandatos de la Junta Directiva;
- b) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la Junta Directiva;
- c) Presentar a la Junta el proyecto de presupuesto anual, los proyectos de presupuesto extraordinario; los balances anuales y trimestrales y la memoria anual del Instituto;
- d) Convocar a sesiones extraordinarias;
- e) Nombrar y remover, lo mismo que ejercer la autoridad disciplinaria, en relación con el personal del Instituto, conforme con los reglamentos;
- f) Asistir a las sesiones de la Junta directiva, con voz pero sin voto;
- g) Resolver las solicitudes de asistencia técnica de acuerdo con las normas establecidas reglamentariamente por la Junta Directiva;
- h) Firmar junto con el contador del Instituto, los cheques que se emitan;
- i) Ejercer la representación legal del INFOCOOP; y
- j) Desempeñar cualquier función que le asigne la ley, la Junta Directiva y los reglamentos.

Artículo 171

El director ejecutivo no podrá nombrar para que formen parte del personal del INFOCOOP a quienes fueren cónyuges o estuvieren ligados con los miembros de la Junta directiva, con él, con el subdirector o el auditor, por parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive o de afinidad hasta el segundo grado, también inclusive.

Artículo 172

El INFOCOOP tendrá una comisión de crédito que será presidida por el director ejecutivo, estará integrada por los funcionarios que determine el reglamento y a la cual corresponde estudiar y dictaminar sobre las solicitudes de préstamo presentadas por cualquier asociación cooperativa, sobre los empréstitos y sobre las emisiones de bonos del INFOCOOP. Se exceptúan las solicitudes de crédito a las emisiones de bonos del INFOCOOP. Se exceptúan las solicitudes de créditos a ser financiadas con recursos

provenientes del Fondo de Cooperativas de Autogestión, las cuales serán conocidas por la comisión a que se refiere el artículo 145 de esta ley.

Artículo 173

El Instituto tendrá un auditor, nombrado por la Junta Directiva por un período de cuatro años, pudiendo ser reelecto. Son aplicadas al auditor las normas sobre nombramiento y remoción establecidas para el director ejecutivo.

Artículo 174

El nombramiento del auditor debe recaer en persona que tenga el título de contador público autorizado. La Junta Directiva podrá nombrar otra persona de preparación equivalente, cuando sacado a concurso por dos veces el cargo, ningún profesional con el título indicado haga solicitud para servirlo o no acepte las condiciones determinadas por el INFOCOOP.

Artículo 175

El auditor tiene como función ejercer vigilancia y fiscalización constantes sobre la marcha administrativa y financiera del INFOCOOP. Dependerá directamente de la Junta Directiva y responderá ante ella por su gestión.

Artículo 176

La Junta Directiva preparará un reglamento orgánico para el Instituto, en el cual se determinará su organización interna, el número de funciones de los departamentos, secciones y oficinas y demás extremos necesarios para garantizar su eficaz funcionamiento técnico y administrativo.

Artículo 177

El personal del INFOCOOP deberá ser integrado a base de idoneidad comprobada y la promoción dentro de las categorías respectivas deberá hacerse tomando en cuenta los méritos del servidor y su identificación con los fines del Instituto.

CAPITULO III DEL FINANCIAMIENTO

Artículo 178

Formarán el patrimonio de la INFOCOOP los siguientes rubros: a) El capital de 5.000.000,00 colones asignados al Departamento de Cooperativas, en el artículo 8º de la Ley No. 1644 del 26 de setiembre de 1953 y sus reformas, sus reservas acumuladas a su activo pasivo; b) El porcentaje del impuesto de consumo sobre los cigarrillos a los que se refieren los artículos 5 y 6 de la Ley Reguladora entre Productores e Industriales del Tabaco, No. 2072 del 15 de noviembre de 1956 y sus reformas; el cual debe usarse para los fines específicos que indica esa ley; c) Un aporte anual equivalente al 10% de las utilidades que produzcan las instituciones del Estado que forman parte del Sistema Bancario Nacional, incluyendo al Banco Central como organismo rector del sistema; d) Con un 40% de lo recaudado de la venta de refrescos gaseosos que determina la ley No.3021 del 21 de agosto de 1962; e) 5.000.000,00 colones en bonos del Estado; f) Los créditos otorgados o garantizados por el Estado o el Banco Nacional de Costa Rica a favor del Departamento de Cooperativas, en la forma y condiciones en que ellos fueron contratados; g) Las sumas o partidas que le Estado, las instituciones autónomas o semiautónomas y las municipalidades, consignen en sus respectivos presupuestos ordinarios y extraordinarios para el fomento de las cooperativas; h) Las donaciones,

herencias o legados que reciba de personas físicas y jurídicas; i) Las multas, impuesto y recaudaciones provenientes de esta ley;

Artículo 179

Además de lo indicado en el artículo anterior, formarán parte del patrimonio del INFOCCOP, las utilidades netas provenientes de las liquidaciones anuales del Instituto. De éstas un 10% se destinará a formar la reserva legal. Las pérdidas netas que durante un ejercicio económico pudiera tener el INFOCOOP, deberán descargarse a la reserva legal acumulada. Si dicha reserva no fuere suficiente para compensar las pérdidas, el déficit se mantendrá debidamente contabilizado hasta que pueda liquidarse de la manera aquí prevista. Las certificaciones expedidas por el INFOCOOP para el cobro de las sumas que se le adeuden, de acuerdo con el título III, Capítulo III de esta ley, constituirán título ejecutivo.

Artículo 180

El monto de capital prestado por los Departamentos Comercial e Hipotecario del Banco Nacional de Costa Rica, al Departamento de Cooperativas, en calidad de ayuda directa para la atención de la demanda crediticia y sus necesidades presupuestarias será integrado proporcionalmente a tales departamentos, hasta por el monto de los aportes que el INFOCOOP habrá de recibir anualmente de la misma institución bancaria.

Artículo 181

Independientemente de los servicios crediticios que con sus recursos iniciales el INFOCOOP pueda brindarles a las cooperativas del país, el Sistema Bancario Nacional continuará apoyando financieramente a las cooperativas que si lo requieran, para el desenvolvimiento normal de sus actividades económico-sociales

Artículo 182

Con el producto bruto de la colocación de sus propios recursos financieros, ingresos por concepto de créditos redescontados o redistribuidos, otros ingresos directos, el INFOCOOP confeccionará los presupuestos anuales de gastos para los diferentes departamentos que lo componen. Hasta tanto el INFOCOOP no logre su consolidación económica que le permita generar los ingresos que faciliten el normal crecimiento para la prestación de los servicios a las cooperativas, el Instituto previo acuerdo de su Junta Directiva y aprobación de Contraloría General de la República, podrá utilizar anualmente hasta un diez por ciento de su patrimonio para los presupuestos de gastos.

Artículo 183

Refórmase el artículo 4 de la Ley No. 3021 del 21 de agosto de 1962 para que se lea así: "El impuesto sobre el consumo de refrescos gaseosos y bebidas carbonatadas de franquicia extranjera, será de un céntimo de colón (0,01 colones) por onza según la capacidad de cada envase. Cuando se trate de refrescos gaseosos y bebidas carbonatadas de marcas nacionales, será de siete céntimos de colón (0,07 colones) por envase cuya capacidad sea de hasta de doce onzas; cuando el expendio se haga con envases de mayor capacidad, el impuesto se pagará proporcionalmente. Cuando se trate de refrescos y bebidas carbonatadas manufacturadas únicamente con frutas naturales el impuesto será de un céntimo de colón (0,01 colones) por envase de hasta doce onzas y de dos céntimos de colón (0,02 colones) en envases mayores de doce onzas. Para la venta de refrescos gaseosos y bebidas carbonatadas expedidas por un medio de máquinas y que no sean embotellados, se pagará un impuesto de consumo del 20% del valor de la facturación en fábrica. La Dirección General de Economía fijará a su nivel

actual el precio de venta de los distribuidores y consumidores, de los refrescos afectados por las disposiciones anteriores. Del producto de este impuesto, se girarán, cada año, las siguientes partidas: Un cuarenta por ciento al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo el cual se destinará a cubrir el presupuesto anual de gastos corrientes. Un quince por ciento a la Universidad de Costa Rica, la que deberá invertir un siete y medio por ciento en la construcción de la Facultad de Derecho, en la financiación de programas académicos de ésta y en la construcción de centros regionales universitarios. Un seis por ciento a la Facultad de Agronomía para financiar los programas de capacitación campesina, estaciones experimentales y los programas de extensión agrícola. Un uno y medio por ciento lo invertirá en la financiación de programas de bienestar estudiantil, tales como, residencias estudiantiles, transporte y becas. Un dos y medio por ciento al Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional. Un cinco por ciento al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Dichas sumas en proporción al monto recaudado, deberán ser giradas mensualmente por el Banco Nacional de Costa Rica, a las instituciones beneficiarias para el cumplimiento de sus fines".

Artículo 184

El poder Ejecutivo estará obligado a incluir en el Presupuesto Nacional para cada ejercicio fiscal la suma que le corresponde al INFOCOOP con base a la presente ley. La Contraloría General de la República fiscalizará el cumplimiento de la presente disposición.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

I

Noventa días contados a partir de la promulgación de la presente ley, una comisión ad hoc, compuesta por delegados de la Oficina de Planificación Nacional y Política Económica y del Instituto Nacional de Cooperativas y la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, presentarán al Poder Ejecutivo el reglamento de la presente ley para su aprobación.

II

Las cooperativas, uniones o federaciones debidamente inscritas que decidan convertirse en cooperativas, uniones o federaciones de autogestión en los términos que esta ley establece, lo harán de pleno derecho y su inscripción para todos los efectos legales contará a partir del momento que el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo le dé ese carácter.

III

Se concede un término de seis meses, a partir de la promulgación de la presente ley, a todas las cooperativas, uniones y federaciones que existan en el país, a fin de que ajusten sus estatutos, reglamentos y funcionamiento a las disposiciones de la presente ley.

IV

El Consejo Nacional de Cooperativas en un plazo de 60 días a partir de la promulgación de esta ley, convocará la asamblea de las cooperativas de autogestión para nombrar los 10 delegados que se integrarían al Consejo Nacional de Cooperativas y se deberá proceder a llenar las nuevas plazas en el directorio.

V

Cuando se produzca una vacante en la Junta directiva del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, entre los representantes del sector cooperativo, el Consejo Nacional de Cooperativas procederá a llenar la vacante con un representante de las cooperativas de autogestión.

Al vencimiento del período de los actuales representantes del Consejo de esa Junta directiva, se procederá de acuerdo con lo estipulado en esta ley.

VI

El personal y el presupuesto de la Oficina de Cooperativas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá ser trasladado al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, a efecto de que el Instituto pueda cumplir con las funciones de inscripción y registro que la presente ley le confiere.

Mientras no se haya cumplido con lo dispuesto en el párrafo anterior, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, continuará prestando los servicios de inscripción y registro.

VII

En el momento en que surja la vida jurídica la confederación de cooperativas de autogestión, ésta sustituirá en todos sus derechos y funciones a la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión.

El Fondo Nacional y todos los bienes adquiridos por el Consejo Nacional de Cooperativas, con recursos del Fondo Nacional de Cooperativas de Autogestión pasarán a ser propiedad de la confederación.

VIII

Se excluye de la aplicación de la norma 100 de la Ley de Presupuesto, al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.

4.12. CUBA

1 LEY NO.95 COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y DE CRÉDITOS Y SERVICIOS, año 2002

RICARDO ALARCON DE QUESADA: Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba.

HAGO SABER: Que la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la sesión del dos de noviembre del dos mil dos, correspondiente al Noveno Período Ordinario de Sesiones de la Quinta Legislatura, ha aprobado lo siguiente:

POR CUANTO: La Constitución de la República, en su artículo 20, reconoce el derecho de los agricultores pequeños de asociarse entre sí, tanto a los fines de la producción agropecuaria como a los de obtención de créditos y servicios estatales y encarga a la ley regular el ejercicio de ese derecho.

POR CUANTO: Las cooperativas agropecuarias, en sus dos formas, las de producción y las de créditos y servicios, consignadas en la Ley de Reforma Agraria del 17 de mayo de 1959 y su desarrollo acelerado a partir del I Congreso del Partido Comunista de Cuba, han constituido una forma avanzada de producción socialista y propiciado además, el desarrollo social de la vida campesina como uno de los principios de la política agraria de la Revolución.

POR CUANTO: La Ley No. 36, Ley de Cooperativas Agropecuarias de 22 de julio de 1982 ha regido el desarrollo del movimiento cooperativo cubano durante veinte años, ha constituido el soporte jurídico indispensable que permitió transformar en forma ordenada y voluntaria la pequeña producción campesina individual, en formas de producción colectiva; no obstante, resulta necesario incorporar las experiencias positivas obtenidas en los últimos años y asimilar los cambios socio-económicos y estructurales ocurridos en el país.

POR CUANTO: El IX Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, acordó proponer a la Asamblea Nacional del Poder Popular la promulgación de una nueva legislación cooperativa que propicie en las actuales circunstancias el fortalecimiento y continuo desarrollo de la producción agropecuaria sostenible de las cooperativas y de los agricultores pequeños y su familia, como vía importante para contribuir al auge de la economía nacional.

POR TANTO: La Asamblea Nacional del Poder Popular, en uso de las atribuciones que le están conferidas en el inciso b) del artículo 75 de la Constitución de la República acuerda la siguiente:

LEY No. 95

LEY DE COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y DE CRÉDITOS Y SERVICIOS

CAPÍTULO I

DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY

ARTÍCULO 1.- La presente Ley tiene los objetivos siguientes:

- a) actualizar la legislación en materia de Cooperativas de Producción Agropecuarias y de Créditos y Servicios atendiendo a los cambios socio-económicos y estructurales ocurridos en el país;
- b) coadyuvar al fortalecimiento de las cooperativas como entidades económicas socialistas, con autonomía, autogestión y proyección social;
- c) obtener incrementos en la producción agropecuaria sostenible con mayor eficiencia y calidad;
- d) propiciar un mayor intercambio de acciones y colaboración de las cooperativas con los órganos locales del Poder Popular, y
- e) promover la constitución de nuevas cooperativas.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 2.- A los efectos de esta Ley, se entiende por:

Producciones directivas: aquellas producciones agropecuarias y forestales cuyo monto y destino se determinan por el Estado para cubrir parte de las necesidades básicas de la economía nacional y que son contratadas a este fin con las cooperativas.

Otras producciones agropecuarias y forestales: aquellas que las cooperativas pueden vender a entidades estatales u otras autorizadas, concurrir al Mercado Agropecuario, o destinarlas a su propio abastecimiento o al de otras cooperativas,

Línea fundamental de producción: aquella producción agropecuaria a la cual se dedica habitualmente la cooperativa, que constituye la fuente principal de sus ingresos y representa una producción básica para el desarrollo de la economía nacional o territorial.

Objeto social: comprende su línea fundamental y las demás producciones agropecuarias y forestales u otras actividades lícitas de carácter productivo, de servicios y

comercialización vinculadas a la producción agropecuaria, que les hayan sido debidamente autorizadas a las cooperativas.

Reserva para cubrir contingencias: fondo financiero irrepartible y obligatorio que debe crear y mantener cada cooperativa a partir de sus utilidades, cuyo monto no debe ser inferior al 10 % del valor de su patrimonio, el que está destinado exclusivamente a solventar situaciones económicas difíciles, debidas a catástrofes naturales u otras causas no cubiertas por el seguro.

Bienes agropecuarios: la tierra, los animales, las instalaciones, las plantaciones, los equipos y los demás medios e instrumentos de la cooperativa destinados a la producción agropecuaria, así como las viviendas vinculadas y medios básicos de las cooperativas, mientras su propiedad no sea transferida a sus ocupantes.

ARTÍCULO 3.- Las cooperativas se rigen por los principios siguientes:

a) voluntariedad: la incorporación y permanencia de los miembros de las cooperativas es absolutamente voluntaria;

b) cooperación y ayuda mutua: todos los miembros trabajan y aúnan sus esfuerzos para el uso racional de los suelos y bienes agropecuarios, propiedad o en usufructo de las cooperativas o de los cooperativistas;

c) contribución al desarrollo de la economía nacional: todos los planes y programas de las cooperativas están dirigidos y tienen como objetivo fundamental trabajar por el desarrollo económico y social sostenible de la nación;

d) disciplina cooperativista: todos sus miembros conocen, cumplen y acatan conscientemente, las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos, los acuerdos de la Asamblea General y las demás leyes y regulaciones que son de aplicación en las cooperativas;

e) decisión colectiva: todos los actos que rigen la vida económica y social de las cooperativas se analizan y deciden en forma democrática por la Asamblea General y la Junta Directiva, en que la minoría acata y se subordina a lo aprobado por la mayoría;

f) territorialidad: los agricultores pequeños se integran y pertenecen a la cooperativa del territorio en que están enclavadas sus tierras, con el fin de facilitar la mejor y más económica gestión de la cooperativa con relación a sus miembros;

g) bienestar de los cooperativistas y sus familiares: las cooperativas trabajan para lograr la satisfacción racional de las necesidades materiales, sociales, educativas, culturales y espirituales de sus miembros y familiares;

h) colaboración entre cooperativas: las cooperativas se prestan colaboración entre sí mediante la compraventa de productos para el autoabastecimiento, pías de cría, semillas, prestación de servicios para la producción, intercambio de experiencias, y otras actividades lícitas sin ánimo de lucro;

i) solidaridad humana: practican la solidaridad humana con sus miembros, trabajadores y demás personas que habiten en las comunidades donde están enclavadas;

j) interés social: todos sus actos y acciones tienen como fin el interés social.

ARTÍCULO 4.- La Cooperativa de Producción Agropecuaria es una entidad económica que representa una forma avanzada y eficiente de producción socialista con patrimonio y personalidad jurídica propios, constituida con la tierra y otros bienes aportados por los agricultores pequeños, a la cual se integran otras personas, para lograr una producción agropecuaria sostenible.

ARTÍCULO 5.- La Cooperativa de Créditos y Servicios es la asociación voluntaria de los agricultores pequeños que tienen la propiedad o el usufructo de sus respectivas tierras y demás medios de producción, así como sobre la producción que obtienen.

Es una forma de cooperación agraria mediante la cual se tramita y viabiliza la asistencia técnica, financiera y material que el Estado brinda para aumentar la producción de los agricultores pequeños y facilitar su comercialización. Tiene personalidad jurídica propia y responde de sus actos con su patrimonio.

ARTÍCULO 6.- Las cooperativas tienen objetivos y fines de carácter social encaminados al mejoramiento de las condiciones de vida de los cooperativistas y sus familiares, así como contribuir al desarrollo social del país, del territorio y de las comunidades en que están enclavadas.

Estas cooperativas promueven la participación consciente de sus miembros en las tareas económicas y sociales de la nación, la localidad y la comunidad.

ARTÍCULO 7.- Las cooperativas trabajan en la educación de sus miembros para el cumplimiento de los principios que las rigen, así como en su capacitación técnica y la formación de sus cuadros.

ARTÍCULO 8.- Las Cooperativas de Producción Agropecuaria tienen los fines fundamentales siguientes:

- a) desarrollar con eficiencia económica la producción agropecuaria sostenible, en atención a los intereses de la economía nacional, de la comunidad y de la propia cooperativa;
- b) utilizar racionalmente los suelos agrícolas, propiedad o en usufructo de la cooperativa y los demás bienes agropecuarios y recursos productivos con que cuentan;
- c) incrementar sostenidamente la cantidad y calidad de las producciones directivas y propiciar su rápida comercialización, y
- d) desarrollar otras producciones agropecuarias y forestales y prestar servicios agropecuarios que hayan sido autorizados en su objeto social.

ARTÍCULO 9.- Las Cooperativas de Créditos y Servicios tienen los fines fundamentales siguientes:

- a) planificar, contratar, comprar, vender y utilizar en forma organizada y racional los recursos y servicios necesarios para sus miembros y la cooperativa, en razón de la producción agropecuaria;
- b) gestionar, tramitar y colaborar en el control, la utilización y recuperación de los créditos bancarios necesarios para sus miembros y la propia cooperativa, destinados a la producción agropecuaria;
- c) planificar y comercializar las producciones directivas de los miembros y de la cooperativa ;
- d) comercializar otras producciones y servicios autorizados en su objeto social, y
- e) adquirir, arrendar y explotar en forma colectiva los equipos agrícolas y de transporte y construir las instalaciones necesarias para mejorar la eficiencia en la producción y comercialización agropecuaria, autorizadas en su objeto social.

ARTÍCULO 10.- La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños representa los intereses de los agricultores pequeños y cooperativistas, promueve y estimula su plena incorporación y participación en el movimiento cooperativo, trabaja en su fortalecimiento y consolidación como forma de producción socialista, para lo cual la presente Ley y sus regulaciones complementarias le señalan atribuciones específicas.

CAPÍTULO III DE LA CONSTITUCIÓN

ARTÍCULO 11.- Los agricultores pequeños tienen derecho a asociarse entre sí en cooperativas de producción agropecuaria, unificar sus tierras y demás bienes agropecuarios de los que son propietarios y expresar su voluntad en la asamblea convocada al efecto, y mediante solicitud formal de constitución a los organismos competentes.

ARTÍCULO 12.- Los agricultores pequeños que hayan decidido asociarse en Cooperativas de Producción Agropecuaria tienen derecho al cobro de sus tierras y demás bienes agropecuarios, según tasación oficial efectuada al efecto, los que se incorporan en su totalidad al patrimonio de la cooperativa.

ARTÍCULO 13.- Los agricultores pequeños propietarios o usufructuarios de tierras, tienen derecho a asociarse en Cooperativas de Créditos y Servicios, expresando su voluntad en asamblea convocada al efecto y mediante solicitud formal de constitución a los organismos competentes.

ARTÍCULO 14.- La constitución de Cooperativas de Producción Agropecuaria se autoriza por el Ministerio de la Agricultura a propuesta de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, oído el parecer del Ministerio del Azúcar cuando proceda. La constitución de Cooperativas de Créditos y Servicios se autoriza igualmente a propuesta de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, por el Ministerio de la Agricultura o del Azúcar según corresponda.

Los requisitos y formalidades para la constitución de ambas formas de cooperativas se establecen en sus respectivos Reglamentos Generales y adquieren personalidad jurídica a partir de su inscripción en el Registro correspondiente de la Oficina Nacional de Estadísticas.

ARTÍCULO 15.- El Ministerio de la Agricultura o el del Azúcar, según corresponda, de conjunto con la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, cuando así lo estimen procedente y con el propósito de estimular la constitución de nuevas Cooperativas de Producción Agropecuaria, proponen al Ministerio de Finanzas y Precios, la exención o bonificación de impuestos a las nuevas entidades durante su fase inicial, la que no excederá de cinco años.

CAPÍTULO IV

DE LAS RELACIONES CON LOS ÓRGANOS Y ORGANISMOS DEL ESTADO

Sección Primera

De las Relaciones con el Estado, sus Órganos y Organismos de la Administración Central y sus Entidades.

ARTÍCULO 16.- Las cooperativas, objeto de esta Ley como entidades productoras, se insertan en el sistema de organizaciones primarias de la producción agropecuaria del país y a esos efectos tienen con el Estado las obligaciones siguientes:

- a) usar racionalmente los suelos agrícolas en las tierras propiedad de las Cooperativas de Producción Agropecuaria, en las de propiedad o usufructo de los agricultores pequeños pertenecientes a las Cooperativas de Créditos y Servicios y en las que a dichas entidades haya entregado el Estado en usufructo;
- b) utilizar y explotar racionalmente los bienes agropecuarios de su propiedad y los recibidos en usufructo;

- c) elaborar y proponer a los Ministerios de la Agricultura o del Azúcar, según corresponda, sus planes de producción y programas de desarrollo;
- d) vender las producciones directivas según se determine por el organismo competente;
- e) contratar, adquirir y utilizar racionalmente los insumos y demás recursos productivos y financieros;
- f) proteger adecuadamente las tierras, animales, cultivos, plantaciones, bosques, instalaciones, equipos, viviendas y demás bienes propiedad o en usufructo de las cooperativas, cumpliendo las disposiciones vigentes en materia de protección y seguridad;
- g) cumplir y aplicar las regulaciones fitosanitarias, veterinarias, de uso y conservación de suelos, forestales, utilización de recursos hídricos y todas las demás relacionadas con la protección del medio ambiente a que estén obligadas;
- h) cumplir la política de especies y variedades y las regulaciones vinculadas con el cuidado del genofondo y la utilización de semillas adecuadas;
- i) aplicar los adelantos de la ciencia y la técnica, y la introducción de nuevas tecnologías;
- j) cumplir y hacer cumplir las disposiciones sobre el control de la tierra establecidas por el Ministerio de la Agricultura;
- k) cumplir las regulaciones vigentes en materia financiera, crediticia y contable;
- l) abonar puntualmente las obligaciones tributarias que le son exigibles;
- m) cumplir y hacer cumplir la legislación agraria y cualquier otra a que estén obligadas;
- n) utilizar adecuadamente de acuerdo con sus necesidades productivas a estudiantes bajo el principio martiano de estudio-trabajo, y
- o) utilizar la tracción animal, los biofertilizantes y biopesticidas a favor del ahorro y del incremento de la producción y su calidad.

ARTÍCULO 17.- El Estado ejerce el control del cumplimiento de las obligaciones de las cooperativas a través de sus Órganos, Organismos de la Administración Central, sus estructuras provinciales y municipales y sus órganos de Control o Inspección, en razón de sus respectivas competencias.

ARTÍCULO 18.- El Estado y el Gobierno brindan todo el apoyo posible a la constitución, desarrollo y fortalecimiento de las cooperativas y para ello de acuerdo con sus atribuciones, ejecutan las acciones siguientes:

- a) entrega de tierras en usufructo, cuando así sea posible y necesario para la producción de las cooperativas;
- b) asistencia técnica para el desarrollo, mediante el suministro de información técnica, acceso a los resultados de las investigaciones y la experimentación, asignación, recalificación y superación postgrado de sus técnicos;
- c) prestación de servicios técnicos para la protección de plantas, veterinaria, suelos y agroquímica, certificación de semillas y otros relacionados con la producción agropecuaria;
- d) facilitar y colaborar con la introducción de la ciencia y la técnica que sean accesibles a la cooperativa;
- e) dotarlas de un marco jurídico específico;
- f) asignación de recursos e insumos para la producción y obras sociales;
- g) establecimiento de precios justos y estables para sus producciones;
- h) otorgamiento de créditos agropecuarios;
- i) ayuda económica, de conformidad con las regulaciones establecidas, y
- j) cualesquiera otras que se consideren necesarias.

ARTÍCULO 19- Corresponde a los Ministerios de la Agricultura o del Azúcar, según proceda:

- a) autorizar el objeto social de las cooperativas, a propuesta de la Asamblea General oído el parecer de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y controlar su cumplimiento;
- b) aprobar de conjunto con la cooperativa sus planes de producción y programas de desarrollo, además de controlar su ejecución;
- c) establecer la política estatal y dictar las disposiciones para la asignación y adquisición de los insumos y demás recursos productivos destinados a la producción, autoabastecimiento y obras sociales de las cooperativas y controlar su cumplimiento;
- d) designar las empresas estatales encargadas de comprar las producciones directivas, y de vender los insumos, demás recursos productivos y servicios;
- e) inspeccionar y asesorar en el cumplimiento de las regulaciones vigentes en materia fitosanitaria, veterinaria, de suelos, forestal y la política de variedades y semillas;
- f) inspeccionar y asesorar en materia de legislación agraria y el sistema de control de la tierra;
- g) inspeccionar y asesorar en materia de economía y contabilidad;
- h) efectuar auditorias, de acuerdo con lo establecido en las regulaciones sobre la materia;
- i) asesorar sobre aplicación de normas agrotécnicas y zootécnicas, y
- j) dictar en el marco de sus respectivas competencias, oído el parecer de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, regulaciones para el mejor funcionamiento de las cooperativas.

Sección Segunda

De las relaciones con las empresas estatales

ARTÍCULO 20. - Las relaciones de las cooperativas con las empresas estatales son contractuales a los fines de vender las producciones directivas, otras producciones que mutuamente acuerden y adquirir insumos y recursos productivos, así como otros productos y servicios necesarios para el cumplimiento de sus actividades económicas y sociales.

A esos efectos, las empresas cumplen la política y las disposiciones que sobre las producciones directivas y los insumos y demás recursos productivos objeto de contrato, se establezcan y dicten por el Ministerio de la Agricultura o del Azúcar según corresponda.

Sección Tercera

De las relaciones con los Órganos Locales del Poder Popular

ARTÍCULO 21.- Las cooperativas fomentan y mantienen relaciones de cooperación con los Organos Locales del Poder Popular para el desarrollo económico y social de las comunidades y municipios en que se enmarcan, dentro de los límites de la presente Ley. Las cooperativas promueven el desarrollo de actividades sociales, educativas, culturales y recreativas, las que se coordinan, cuando así sea necesario, con los Órganos Locales del Poder Popular, quienes le prestan todo el apoyo posible.

ARTÍCULO 22.- Las cooperativas pueden suministrar directamente producciones agrícolas a las instituciones sociales, previo acuerdo con el Consejo de la Administración Municipal correspondiente y la suscripción de contratos con las entidades que procedan.

Las producciones agrícolas no recogidas por las entidades acopiadoras o que corran riesgo de deterioro, son comercializadas por cada cooperativa para el consumo de la localidad en coordinación con el Consejo de la Administración correspondiente.

ARTÍCULO 23.- Las cooperativas y los Órganos Locales del Poder Popular pueden prestarse colaboración mutua para la construcción de obras de beneficio para la comunidad o de la cooperativa, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y las que se establezcan en los Reglamentos Generales.

CAPÍTULO V DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 24.- La Asamblea General es el órgano superior de dirección de las Cooperativas de Producción Agropecuaria y las de Créditos y Servicios, se integra por todos los miembros, quienes eligen de su seno mediante el voto secreto y directo al Presidente y demás miembros de la Junta Directiva. La Asamblea se considera válida para esta elección cuando están presentes las dos terceras partes de sus miembros.

ARTÍCULO 25.- La Junta Directiva es el órgano de dirección de la cooperativa, está integrada por no menos de cinco ni más de once miembros, se subordina a la Asamblea General y le rinde cuenta periódicamente de sus actos y decisiones. Ejerce sus funciones cuando no está reunida la Asamblea General.

ARTÍCULO 26.- El Presidente de la Asamblea General, que lo es también de la Junta Directiva, asegura y responde por el cumplimiento de los acuerdos y decisiones de ambos órganos, ostenta la representación legal de la cooperativa y rinde cuenta periódicamente de su gestión ante la Junta Directiva y la Asamblea General.

ARTÍCULO 27.- Cuando el Presidente u otro miembro de la Junta Directiva demuestre incapacidad para el cargo, incurra en acciones delictivas en el ejercicio del mismo o en otras conductas que lo hagan desmerecer del buen concepto público, puede ser revocado antes del cumplimiento del término de su mandato, por la Asamblea General, la que elige al sustituto.

El proceso de revocación puede ser promovido excepcionalmente por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.

ARTÍCULO 28.- Las cooperativas cuentan, según el caso, con un Consejo Administrativo o un Administrador designado por la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva, y subordinado a ésta.

El Consejo Administrativo o el Administrador se encarga de las tareas productivas, administrativas y económicas, en cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General y las decisiones de la Junta Directiva a quienes rinde cuenta de su gestión periódicamente.

ARTÍCULO 29 - En cada cooperativa se constituye la Comisión de Control y Fiscalización, integrada por no menos de tres ni más de cinco miembros, encargada de supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y la utilización de los recursos financieros y materiales de la cooperativa. Esta Comisión se elige en la misma oportunidad que la Junta Directiva por la Asamblea General, a quien rinde cuenta periódicamente de su gestión. A ella no pueden pertenecer los miembros de la Junta Directiva.

ARTÍCULO 30.- El Reglamento General de ambas cooperativas regula las atribuciones y funcionamiento de la Asamblea General, la Junta Directiva, el Consejo Administrativo o Administrador, de la Comisión de Control y Fiscalización y las responsabilidades del Presidente.

CAPÍTULO VI DEL PATRIMONIO Y PROPIEDAD

Sección Primera

Del Patrimonio y Propiedad de las Cooperativas de Producción Agropecuaria

ARTÍCULO 31.- La propiedad de las Cooperativas de Producción Agropecuaria constituye la base para el desarrollo agrícola sostenible de la economía cooperativa y contribuye al fortalecimiento de la economía nacional. Es también la base económica para el logro de los objetivos sociales de la cooperativa y es responsabilidad de sus miembros su protección y cuidado.

ARTÍCULO 32.- El patrimonio de las Cooperativas de Producción Agropecuaria está constituido por:

- a) las tierras, los demás bienes agropecuarios, instalaciones, medios culturales, recreativos y otros bienes aportados por sus miembros o adquiridos por compra o cualquier otro título y los construidos por la cooperativa;
- b) los animales y plantaciones, la producción agropecuaria y otras producciones pertenecientes a la cooperativa, así como la producción forestal de conformidad con lo dispuesto en la legislación forestal vigente;
- c) las viviendas construidas, adquiridas o entregadas a la cooperativa en concepto de vinculadas o medios básicos;
- d) las bienhechurías creadas en las tierras entregadas en usufructo;
- e) las reservas acumuladas y los recursos financieros de la cooperativa, y
- f) los derechos reconocidos en la ley.

El Estado puede conceder en usufructo tierras, bosques e instalaciones agropecuarias, con la obligación de utilizarlas racionalmente, conforme a sus fines, protegerlas y cuidarlas, pero éstos no integran su patrimonio.

ARTÍCULO 33.- Los miembros de las cooperativas que hayan aportado tierras y otros bienes agropecuarios y que por cualquier motivo causen baja de ésta o en caso de disolución sólo tienen derecho al cobro del importe no amortizado y de otros adeudos que con ellos tenga la cooperativa.

ARTÍCULO 34.- La propiedad de las tierras de las Cooperativas de Producción Agropecuaria puede ser transferida a favor del Estado conforme al procedimiento legal establecido por razones de utilidad pública o interés social, a solicitud del Ministro de la Agricultura, oído el parecer de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y del Ministerio del Azúcar, según proceda.

También puede ser transferida por interés de la cooperativa a favor del Estado o de otras cooperativas y por permuta para lo cual se requiere el acuerdo de la Asamblea General y la autorización del Ministerio de la Agricultura, oído el parecer del Ministerio del Azúcar en los casos que proceda.

ARTÍCULO 35.- Las tierras propiedad de las cooperativas no pueden ser gravadas ni embargadas. Se prohíbe el usufructo, el arrendamiento, la aparcería y cualquier otra

forma de gravamen o cesión parcial a favor de personas naturales y jurídicas de los derechos y acciones emanadas de la propiedad de la cooperativa sobre la tierra.

ARTÍCULO 36.- El arrendamiento o cualquier acto de disposición sobre los demás bienes agropecuarios propiedad de las Cooperativas de Producción Agropecuaria, requiere la aprobación de la Asamblea General según las regulaciones que al efecto se establezcan en el Reglamento General.

ARTÍCULO 37.- En caso de fallecimiento del cooperativista se transmiten a sus herederos la amortización pendiente de pago por los bienes aportados, las utilidades no recibidas y los anticipos pendientes de pago.

Sección Segunda

Del Patrimonio y Propiedad de las Cooperativas de Créditos y Servicios

ARTÍCULO 38.- El patrimonio de las Cooperativas de Créditos y Servicios está constituido por:

- a) las edificaciones, instalaciones, maquinarias, equipos, implementos agrícolas y otros bienes adquiridos por las cooperativas para uso colectivo;
- b) el fondo colectivo, integrado por el aporte de sus miembros;
- c) las reservas acumuladas y otros recursos financieros;
- d) las plantaciones y producciones agropecuarias de las tierras recibidas en usufructo, y
- e) las viviendas construidas, adquiridas o entregadas a las cooperativas en concepto de vinculadas o medios básicos.

ARTÍCULO 39.- Las Cooperativas de Créditos y Servicios pueden recibir tierras, bosques e instalaciones agropecuarias en usufructo por parte del Estado, para uso colectivo. Estos bienes no integran el patrimonio de las cooperativas y éstas quedan obligadas a su utilización racional, conforme a sus fines, protección y cuidado.

ARTÍCULO 40.- El arrendamiento o cualquier acto de disposición sobre los bienes propiedad de las Cooperativas de Créditos y Servicios requieren la aprobación de la Asamblea General, según las regulaciones que al efecto se establezcan en el Reglamento General.

Sección Tercera

De las viviendas

ARTÍCULO 41.- Las viviendas ubicadas en las tierras aportadas a la Cooperativa de Producción Agropecuaria, continúan siendo propiedad personal del cooperativista, y su ocupante legal mantiene los derechos establecidos en la legislación vigente. La cooperativa concede a éstos el derecho de superficie.

ARTÍCULO 42.- Las viviendas construidas o adquiridas por la cooperativa en tierras de su propiedad con carácter de vinculadas o medios básico son ocupadas por los cooperativistas que acuerde la Asamblea General, quienes tienen el derecho a la adquisición de su propiedad en el caso de las vinculadas, mediante el pago de su precio legal, una vez transcurrido el término de permanencia establecido en la legislación vigente.

La cooperativa concede a sus miembros el derecho de superficie a título gratuito a los efectos de obtener la propiedad de estas viviendas.

ARTÍCULO 43.- No obstante lo dispuesto en esta Sección sobre la propiedad de las viviendas, la permuta, o cesión de cualquier otro derecho, debe ser previamente aprobada por la Asamblea General sin perjuicio del cumplimiento de los trámites legales establecidos. Cuando se trate de transmisión hereditaria se atiene a lo dispuesto en la legislación vigente.

ARTÍCULO 44.- Las Cooperativas de Créditos y Servicios pueden construir viviendas para sus trabajadores asalariados en los terrenos que previamente el Estado les haya concedido el derecho de superficie, de acuerdo con las regulaciones que al efecto se dicten por el organismo competente. Estas viviendas tienen el carácter de vinculadas o medios básicos.

CAPÍTULO VII DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

Sección Primera

Del Régimen económico de las Cooperativas de Producción Agropecuaria

ARTÍCULO 45.- La Cooperativa de Producción Agropecuaria remunera el trabajo de cada miembro de acuerdo con la cantidad y calidad del mismo, y conforme con el principio socialista "de cada cual según su capacidad; a cada cual según su trabajo".

Los cooperativistas, con independencia de su aporte o no en tierras a la cooperativa, tienen derecho a participar de las utilidades de ésta, según la cantidad y calidad del trabajo que personalmente han realizado.

El cooperativista recibe periódicamente un anticipo en dinero en correspondencia con los resultados del trabajo realizado, según se establezca en el Reglamento General.

ARTÍCULO 46.- Las cooperativas cierran anualmente sus estados financieros certificados por el Ministerio de la Agricultura o del Azúcar, según corresponda, a través de los cuales se determinan las utilidades del período, después de liquidar las obligaciones con el banco, el pago de los tributos y demás gastos contraídos en el proceso productivo.

ARTÍCULO 47.- Determinado el monto anual de las utilidades, después de deducir los fondos destinados a la reserva para cubrir contingencias y el pago del impuesto sobre utilidades, se destina obligatoriamente parte de aquellas para el pago de las tierras y bienes aportados por los cooperativistas.

Del resto de las utilidades se destina una parte para el fondo de operaciones y el fondo socio-cultural, y otra parte igual para distribuir entre los cooperativistas, según lo que al efecto establezca el Reglamento General.

ARTÍCULO 48.- El pago de las tierras y bienes aportados por los cooperativistas se realiza anualmente con el porcentaje de las utilidades que acuerde la Asamblea General, el que no puede ser inferior al 20 % de éstas, hasta su liquidación.

ARTÍCULO 49.- El fondo de operaciones está dedicado a solventar los gastos y erogaciones del próximo año y puede dedicarse a:

- a) adquisición de activos fijos tangibles y activos circulantes;
- b) construcción de viviendas;

- c) construcción de instalaciones productivas y sociales;
- d) desarrollo científico- técnico y actividades de capacitación;
- e) desarrollo de la comunidad;
- f) actividades a favor del medio ambiente, y
- g) otros que acuerde la Asamblea General.

ARTÍCULO 50.- El fondo socio-cultural no puede ser inferior al 5% de las utilidades anuales y está dedicado a:

- a) coadyuvar al financiamiento de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños;
- b) desarrollar actividades sociales, culturales, recreativas y deportivas;
- c) estimular a los cooperativistas destacados, y
- d) prestar ayuda económica a los cooperativistas, previo acuerdo de la Asamblea General.

ARTÍCULO 51.- Cuando la cooperativa haya liquidado totalmente el pago de los bienes aportados a los cooperativistas, y constituido más de la mitad de la reserva para cubrir contingencias, puede repartir más del 50 % de las utilidades, hasta llegar a un 70% cuando la haya completado. A esos efectos en el Reglamento General se establecen las escalas progresivas.

ARTÍCULO 52.- Las cooperativas que puedan distribuir hasta el 70 % de sus utilidades de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, dedican parte de estas utilidades a incentivar la permanencia de los cooperativistas a partir de los cinco años de trabajo continuo, según la escala y requisitos que se establezcan.

Estas cooperativas dedican también parte de sus utilidades a premiar a los aportadores y fundadores jubilados, en dependencia de los años de trabajo y méritos obtenidos.

Las escalas y requisitos para otorgar los incentivos y premios se establecen en el Reglamento General y el monto de las utilidades a dedicar anualmente para ese propósito, se aprueba por la Asamblea General.

ARTÍCULO 53.- Las cooperativas que tengan pérdidas las solventan por medio de la reserva para cubrir contingencias, las utilidades de períodos futuros y el seguro en los casos que proceda

El Estado puede otorgar ayuda económica en casos excepcionales, sujeta a los controles, restricciones y condiciones que para cada caso se establezcan, a los fines de la recuperación económica de la cooperativa.

Sección Segunda

Del Régimen Económico de las Cooperativas de Créditos y Servicios

ARTÍCULO 54.- Las Cooperativas de Créditos y Servicios crean un fondo colectivo con el aporte de sus miembros en la forma y cuantía acordados en Asamblea General. Este fondo se destina a:

- a) cooperar con el financiamiento de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños;
- b) desarrollar actividades sociales, culturales, recreativas y deportivas;
- c) estimular a los miembros destacados;
- d) contribuir con la construcción y desarrollo de obras sociales, y
- e) ayudar económicamente a los cooperativistas, previo acuerdo de la Asamblea General.

ARTÍCULO 55.- Las Cooperativas de Créditos y Servicios, para el cumplimiento de las actividades económicas autorizadas en su objeto social, crean y mantienen una cuenta bancaria de operaciones a partir de los ingresos obtenidos en dichas actividades.

ARTÍCULO 56.- Las Cooperativas de Créditos y Servicios realizan anualmente el estado financiero de sus actividades económicas, el que es certificado por el Ministerio de la Agricultura o del Azúcar según corresponda.

El saldo favorable obtenido después de destinados los fondos para la reserva dirigidos a cubrir contingencias y efectuados todos los pagos por créditos, tributos y otras deudas del período correspondiente constituye las utilidades que se destinan a:

- a) crear un fondo de desarrollo;
- b) estimular a los trabajadores;
- c) contribuir con el desarrollo económico y social de la comunidad;
- d) efectuar acciones a favor del medio ambiente, y
- e) realizar otros gastos que acuerde la Asamblea General para beneficio colectivo.

ARTÍCULO 57.- El fondo de desarrollo se destina a la compra de activos fijos tangibles, aplicación de la ciencia y la técnica, capacitación y cualquier otra actividad que contribuya al desarrollo de la cooperativa.

CAPÍTULO VIII

DE LOS COOPERATIVISTAS Y TRABAJADORES ASALARIADOS DE LAS COOPERATIVAS

Sección Primera

De los cooperativistas

ARTÍCULO 58.- Pueden ser miembros de las Cooperativas de Producción Agropecuaria los aportadores de tierras y de otros bienes agropecuarios, sus cónyuges, hijos, demás familiares y los trabajadores, que cumplan los requisitos establecidos en su Reglamento General.

Pueden ser miembros de las Cooperativas de Créditos y Servicios los agricultores pequeños propietarios o usufructuarios de tierras, sus cónyuges, hijos, demás familiares y los trabajadores, que cumplan los requisitos establecidos en su Reglamento General.

ARTÍCULO 59.- El miembro de una Cooperativa de Producción Agropecuaria no puede ser propietario o usufructuario de tierras, ni pertenecer simultáneamente a otra cooperativa, o mantener otra actividad laboral que vaya en detrimento de los fines de la cooperativa.

Por excepción y previa la aprobación de la Asamblea General, alguno de sus integrantes puede realizar, por un tiempo determinado, actividades laborales lícitas no relacionadas con la cooperativa.

ARTÍCULO 60.- Los miembros de las cooperativas trabajan conscientemente para cumplir con los fines de su organización, participan en el trabajo común, en el cuidado y protección de la propiedad cooperativa, y de los cooperativistas, de la tierra y demás bienes recibidos en usufructo y en todas las otras actividades que se acuerden.

También es deber de los cooperativistas, mantener relaciones de ayuda mutua con los demás miembros, acorde con la moral socialista, cumplir la disciplina laboral y cooperativista y velar por el cumplimiento de la legalidad socialista.

ARTÍCULO 61.- Los cooperativistas participan de los beneficios provenientes de la actividad económica de la cooperativa, de las actividades sociales, culturales, recreativas y otras de carácter social promovidas y organizadas por la cooperativa.

Disfrutan, además, de los beneficios del autoabastecimiento y de las viviendas que les asigne la cooperativa de acuerdo con lo establecido en sus Reglamentos Internos.

Los miembros de las Cooperativas de Producción Agropecuaria tienen derecho a los beneficios de la seguridad social de conformidad con la legislación vigente en la materia, para lo cual las cooperativas cumplen los aportes financieros y demás obligaciones que según esa legislación corresponda

ARTÍCULO 62.- Los cooperativistas tienen derecho a asistir y participar con voz y voto en la Asamblea General, a elegir, ser elegidos o designados para los cargos y responsabilidades de los órganos de dirección y administración de la cooperativa, a conocer y aprobar sus planes económicos y estados financieros, así como participar en la emulación socialista.

ARTÍCULO 63.- La condición de miembro de la cooperativa cesa por solicitud voluntaria, jubilación o fallecimiento. También puede cesar por medida disciplinaria impuesta por la Asamblea General con la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros, por incumplimiento reiterado de sus deberes como cooperativista o incurrir en conductas que lo hagan desmerecer del buen concepto público.

Los Reglamentos Generales regulan los beneficios que les corresponden a los cooperativistas al cesar como miembros, o a sus herederos al fallecimiento de éstos.

Sección Segunda

De los trabajadores asalariados de las cooperativas

ARTÍCULO 64.- Tanto las Cooperativas de Producción Agropecuaria como las de Créditos y Servicios pueden contratar trabajadores asalariados para el cumplimiento de las actividades económicas aprobadas en su objeto social.

En el caso de trabajadores contratados para realizar labores permanentes se les instruye para la vida cooperativa, a los fines de su ingreso como miembros, una vez vencido de forma satisfactoria el período de prueba según lo establecido en los Reglamentos Generales y ser aprobados por la Asamblea General.

ARTÍCULO 65.- Los trabajadores de ambos tipos de cooperativas reciben sus salarios y demás beneficios, incluyendo los de seguridad social, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente sobre la materia.

Los trabajadores que se incorporen como miembros de las Cooperativas de Producción Agropecuaria, tienen derecho a la participación de las utilidades desde el primer día de su incorporación como trabajadores.

CAPÍTULO IX

DE LA DISCIPLINA LABORAL, SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y RESPONSABILIDAD MATERIAL

Sección Primera

De la disciplina laboral cooperativista

ARTÍCULO 66.- Los miembros de las cooperativas están obligados a observar y cumplir la disciplina cooperativista establecida, cuyas infracciones y medidas a aplicar se señalan en los Reglamentos Generales, y en los Internos de cada cooperativa.

ARTÍCULO 67.- Corresponde a la Junta Directiva de las cooperativas, conocer de las indisciplinas e imponer las medidas disciplinarias de acuerdo con la infracción y la conducta personal mantenida por el cooperativista, con excepción de la separación definitiva que sólo será impuesta por la Asamblea General.

Los cooperativistas inconformes con las medidas impuestas por la Junta Directiva pueden recurrir ante la Asamblea General.

La Asamblea General es el único órgano autorizado para disponer la readmisión del cooperativista separado, cuando considere que éste ha rectificado su conducta y es de nuevo merecedor del derecho de ingresar a la cooperativa.

ARTÍCULO 68.- Los trabajadores de las cooperativas están obligados a cumplir la disciplina laboral, según lo instituido en sus Reglamentos Generales e Internos en los cuales se establecen las infracciones y medidas a aplicar.

Las infracciones se conocen por la Junta Directiva, la que aplica directamente la medida que corresponda de acuerdo con la gravedad del hecho y la conducta personal mantenida por el trabajador, con excepción de la separación definitiva, que es facultad de la Asamblea General.

Los trabajadores inconformes con las medidas aplicadas por la Junta Directiva tienen derecho a reclamar ante la Asamblea General.

Los trabajadores inconformes con las decisiones de la Asamblea General pueden acudir a la vía judicial según lo establecido en la legislación laboral vigente.

Sección Segunda

De la solución de conflictos

ARTÍCULO 69.- Los conflictos o reclamaciones que surjan entre los cooperativistas y la Junta Directiva en cuanto a presuntos derechos de éstos, se conocen y resuelven por la Asamblea General.

ARTÍCULO 70.- Las reclamaciones de derechos laborales, salariales y de seguridad social de los trabajadores de las cooperativas se conocen y resuelven por la Junta Directiva, en caso de inconformidad del trabajador, éste tiene derecho de acudir a la Asamblea General y, de persistir la inconformidad, se reconoce el derecho a acudir a la vía judicial según lo establecido en la legislación laboral vigente.

ARTÍCULO 71.- Los litigios de carácter económico o contractual entre cooperativas y entre éstas y otras entidades se resuelven por los Tribunales competentes.

Corresponde a las Asambleas Generales de las Cooperativas de Créditos y

Servicios, conocer y resolver los conflictos o reclamaciones que se originen por el incumplimiento de los cooperativistas con el plan de producción de la cooperativa. Los litigios sobre derechos, reclamaciones u ocupaciones de tierras se resuelven por las autoridades competentes del Ministerio de la Agricultura conforme a la legislación vigente.

ARTÍCULO 72.- La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños presta su colaboración y mediación, cuando así sea necesario, en la solución de los conflictos que puedan presentarse entre los cooperativistas y los agricultores pequeños con la dirección

de las cooperativas, así como entre éstas y los organismos de la Administración Central del Estado y sus dependencias.

Sección Tercera

De la Responsabilidad Material

ARTÍCULO 73.- Los miembros de las cooperativas están obligados a cuidar y proteger los bienes que integran el patrimonio de éstas y los recibidos en usufructo.

Cuando por cualquier acción u omisión de un miembro de la cooperativa, se cause daño, pérdida o extravío de bienes, sin que el hecho sea constitutivo de delito, el causante está obligado a resarcir a la cooperativa los daños y perjuicios causados.

ARTÍCULO 74.- Corresponde a la Junta Directiva según el alcance económico del daño, y de conformidad con las normas establecidas en el Reglamento General, determinar la responsabilidad material, su valor y forma de resarcimiento. El miembro inconforme con lo dispuesto por la Junta Directiva puede establecer su reclamación ante la Asamblea General.

ARTÍCULO 75.- Los trabajadores de ambos tipos de cooperativas son igualmente responsables de los daños, pérdida o extravío que por su acción u omisión se causen a los bienes propiedad o en usufructo de la cooperativa.

A los trabajadores responsables, se les aplica la legislación laboral vigente en la materia. Corresponde a la Junta Directiva la aplicación de la responsabilidad material y a la Asamblea General conocer de la reclamación que interponga la parte inconforme.

ARTÍCULO 76.- Las atribuciones del Consejo Administrativo o del Administrador referidas a la responsabilidad material, la solución de conflictos y la disciplina cooperativista y laboral, se regulan en los Reglamentos Generales.

CAPÍTULO X

DE LA FUSIÓN, DIVISIÓN Y DISOLUCIÓN DED LAS COOPERATIVAS

Sección Primera

De la Fusión y División

ARTÍCULO 77.- Las cooperativas pueden, oído el parecer de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y del Ministerios de la Agricultura o del Azúcar, según proceda, previo acuerdo de su respectiva Asamblea General, mediante el voto favorable de la mitad más uno de sus miembros, unificarse para constituir una mayor o dividirse en más de una para lograr mayor eficiencia en función del cumplimiento de sus fines y objeto social; igualmente parte de una cooperativa puede segregarse para integrarse a otra.

ARTÍCULO 78.- La nueva cooperativa es continuadora legal de los derechos y obligaciones de aquellas que se unificaron, y en caso de división las nuevas cooperativas asumen la parte proporcional que les corresponda.

La fusión, división o segregación de Cooperativas de Producción Agropecuaria, una vez acordadas por la Asamblea General, requiere la aprobación del Ministerio de la Agricultura, oído el parecer del Ministerio del Azúcar, cuando proceda ; y las de créditos y servicios requieren de la aprobación del Ministerio de la Agricultura o del Azúcar según corresponda .

Las altas y bajas se asientan en el Registro correspondiente de la Oficina Nacional de Estadísticas.

Sección Segunda

De la Disolución

ARTÍCULO 79.- Las cooperativas, pueden, oído el parecer de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y de los Ministerios de la Agricultura y del Azúcar según corresponda, previo acuerdo de sus respectivas asambleas generales mediante el voto favorable de la mitad más uno de sus miembros, solicitar el inicio del proceso de disolución de la cooperativa.

ARTÍCULO 80.- También puede iniciarse excepcionalmente el proceso de disolución de Cooperativas de Producción Agropecuaria, a instancias de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños a propuesta u oído el parecer del Ministerio de la Agricultura o del Ministerio del Azúcar, según corresponda, por causa de utilidad pública o interés social, o en caso de graves violaciones de los principios que rigen la vida de las cooperativas, realización de actividades ilícitas o no autorizadas en su objeto social y por quiebra económica.

En las cooperativas de créditos y servicios, puede iniciarse el proceso excepcional de disolución por causas de utilidad pública o interés social, que afecten total o parcialmente las tierras propiedad de sus miembros.

ARTÍCULO 81.- Para efectuar la liquidación de los bienes de una cooperativa en proceso de disolución se integra una Comisión Liquidadora presidida por el Ministerio de la Agricultura y, con representación del Ministerio del Azúcar cuando proceda, de la Junta Directiva de la cooperativa, de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, de la Agencia Bancaria correspondiente, de la Dirección Provincial de la Vivienda, cuando aquella posea viviendas vinculadas o medios básicos y del Ministerio de Finanzas y Precios, la que analiza las soluciones más favorables a los derechos de los cooperativistas, el cumplimiento de las obligaciones de las cooperativas y la continuidad de la producción agropecuaria, elevando sus propuestas al Ministro de la Agricultura o del Azúcar según corresponda .

ARTÍCULO 82.- La disolución de las Cooperativas de Producción Agropecuaria, se aprueba mediante Resolución del Ministro de la Agricultura, oído el parecer de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y del Ministerio del Azúcar, cuando proceda y, en la misma, se dispone su baja del registro correspondiente de la Oficina Nacional de Estadísticas.

La disolución de las Cooperativas de Créditos y Servicios se aprueban por Resolución del Ministro de la Agricultura o del Azúcar según corresponda, oído el parecer de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y en la misma se dispone igualmente su baja del registro correspondiente .

DISPOSICIÓN ESPECIAL

UNICA: Las cooperativas, y en especial sus órganos de dirección, realizan y apoyan en lo que les corresponda, las actividades para la defensa de la patria y los principios de la Revolución Socialista. Con ese propósito organizan, ejecutan y controlan, en el marco de su competencia, la preparación integral para la defensa en las actividades productivas, de

servicios o de otra índole que tengan a su cargo, conforme a la ley, así como para el cumplimiento de las medidas de la defensa civil y los planes relacionados con estas funciones.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Los Reglamentos Generales de las Cooperativas de Producción Agropecuaria y de las Cooperativas de Créditos y Servicios aprobados por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros continuarán vigentes hasta la promulgación de los nuevos Reglamentos. No serán aplicables las disposiciones que contradigan lo dispuesto en esta Ley.

SEGUNDA: Las disposiciones de los artículos 55, 56 y 57 relativas a las actividades económico-financieras de las cooperativas de créditos y servicios, no se aplicarán hasta haberse constituido oficialmente su órgano de Administración con los requisitos establecidos en el Reglamento General.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de conjunto con los Ministerios de la Agricultura y del Azúcar, presentan las propuestas de Reglamentos Generales de las Cooperativas de Producción Agropecuaria y las de Créditos y Servicios en un término de ciento ochenta días (180) a partir de la publicación de la presente Ley en la Gaceta Oficial de la República elevándolas a la consideración y aprobación del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.

SEGUNDA: Se faculta a los Ministros de la Agricultura y del Azúcar, en el marco de sus respectivas competencias, para dictar las disposiciones que resulten convenientes para la mejor aplicación de lo dispuesto en esta Ley.

TERCERA: El Ministerio de Finanzas y Precios, oído el parecer del Ministerio de la Agricultura, del Ministerio del Azúcar y de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, dictará en un término de noventa días (90) a partir de la publicación de la presente Ley en la Gaceta Oficial, las Normas para la constitución y utilización de la Reserva para cubrir contingencias.

CUARTA: El Instituto Nacional de la Vivienda de conjunto con el Ministerio de la Agricultura y el Ministerio del Azúcar oído el parecer de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, dictará en un término de noventa (90) días, a partir de la publicación de la presente Ley en la Gaceta Oficial, las Normas para la solución de las viviendas construidas en tierras propiedad o en usufructo de las cooperativas de producción agropecuaria y de los agricultores pequeños.

QUINTA: Se derogan la Ley No. 36 "Ley de Cooperativas Agropecuarias" de 22 de julio de 1982 y cuantas disposiciones legales y reglamentarias se opongan al cumplimiento de la presente Ley, la que comenzará a regir a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.

DADA, en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Palacio de las Convenciones, en la ciudad de La Habana, a los dos días del mes de noviembre del dos mil dos.

- **DECRETO-LEY 305/12**

Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.

HAGO SABER: Que el Consejo de Estado ha considerado lo siguiente:

POR CUANTO: La Ley número 59, "Código Civil", de 16 de julio de 1987, reconoce a las cooperativas como personas jurídicas, y una forma de propiedad colectiva, que contribuye al desarrollo de la economía nacional.

POR CUANTO: En el proceso de actualización del modelo económico cubano es necesario la creación, con carácter experimental, de cooperativas en sectores no agropecuarios, lo que re-quiere de una norma jurídica que instrumente su creación y funcionamiento.

POR TANTO: El Consejo de Estado, en el ejercicio de las atribuciones que le han sido conferidas por el inciso c) del artículo 90 de la Constitución de la República de Cuba, adopta el siguiente:

CAPÍTULO I

ARTÍCULO 1.-El presente Decreto-Ley tiene por objeto establecer con carácter experimental las normas que regulan la constitución, funcionamiento y extinción de cooperativas en sectores no agropecuarios de la economía nacional, en lo sucesivo cooperativas.

ARTÍCULO 2.1.-La cooperativa es una organización con fines económicos y sociales, que se constituye voluntariamente sobre la base del aporte de bienes y derechos y se sustenta en el trabajo de sus socios, cuyo objetivo general es la producción de bienes y la prestación de servicios mediante la gestión colectiva, para la satisfacción del interés social y el de los socios.

2. La cooperativa tiene personalidad jurídica y patrimonio propio; usa, disfruta y dispone de los bienes de su propiedad; cubre sus gastos con sus ingresos y responde de sus obligaciones con su patrimonio.

ARTÍCULO 3.-Las cooperativas se rigen por el presente Decreto-Ley, su Reglamento, las disposiciones complementarias a estos, sus estatutos, y de forma supletoria las disposiciones legales que les resulten aplicables.

ARTÍCULO 4.- Las cooperativas se sustentan en los principios siguientes:

a) La incorporación y permanencia de los socios en la cooperativa es libre y voluntaria.

b) Todos los socios trabajan y se prestan ayuda y colaboración entre sí, para alcanzar los objetivos de la cooperativa.

c) Los actos que rigen la vida económica y social de la cooperativa se analizan y deciden en forma democrática por los socios, que participan en la toma de decisiones con iguales derechos.

d) Las obligaciones se cubren con los ingresos. Pagados los tributos establecidos, crean los fondos y las utilidades se reparten entre sus socios en proporción a su contribución al trabajo.

e) Todos los socios aportan su trabajo en la cooperativa; conocen, cumplen y acatan conscientemente las disposiciones que regulan su actividad, así como los

acuerdos de sus órganos de dirección y administración, y demás regulaciones que sean de aplicación a la cooperativa.

f) Los planes de las cooperativas tienen como objetivo contribuir al desarrollo económico y social sostenible de la nación, proteger el medio ambiente, desarrollar sus actividades sin ánimo especulativo y garantizar el cumplimiento disciplinado de las obligaciones fiscales y otras.

Trabajan por fomentar la cultura cooperativista y por las satisfacciones de las necesidades materiales, de capacitación, sociales, culturales, morales y espirituales de sus socios y familiares.

g) Las cooperativas se relacionan entre sí y con otras entidades estatales o no, mediante contratos, convenios de colaboración, intercambio de experiencias y otras actividades lícitas.

ARTÍCULO 5.

1.-Las cooperativas pueden ser de primer o de segundo grado.

2. Es de primer grado la cooperativa que se integra mediante la asociación voluntaria de al menos tres personas naturales.

3. Es de segundo grado la cooperativa que se integra por dos o más cooperativas de primer grado con el objetivo de organizar actividades complementarias afines o que agreguen valor a los productos y servicios de sus socios, o de realizar compras y ventas conjuntas, con vistas a lograr mayor eficiencia.

ARTÍCULO 6.-Las cooperativas de primer grado pueden formarse:

a) A partir del patrimonio integrado por los aportes dinerarios de personas naturales que deciden voluntariamente asociarse entre sí bajo el régimen de propiedad colectiva.

b) Por personas naturales que decidan voluntariamente asociarse entre sí, solo con la finalidad de adquirir conjuntamente insumos y servicios, comercializar productos y servicios, o emprender otras actividades económicas, conservando los socios la propiedad sobre sus bienes.

c) A partir de medios de producción del patrimonio estatal, tales como inmuebles y otros, que se decida gestionar de forma cooperativa y para ello puedan cederse estos, por medio del arrendamiento, usufructo u otras formas legales que no impliquen la transmisión de la propiedad.

d) Una combinación de las formas anteriores.

ARTÍCULO 7.- El término del arrendamiento, usufructo u otras formas legales que no impliquen la transmisión de la propiedad a la cooperativa, a que se refiere el inciso c) del artículo anterior será de hasta diez (10) años, prorrogables por igual término en períodos sucesivos.

ARTÍCULO 8.- Las entidades estatales podrán vender a las cooperativas que se constituyan, equipos, medios, implementos u otros bienes muebles que se determinen, de acuerdo a lo legalmente establecido.

ARTÍCULO 9

1.- Las cooperativas o las cooperativas en formación podrán participar en la licitación de arrendamientos de inmuebles y de la venta de otros activos fijos de un establecimiento estatal.

2. Las cooperativas o cooperativas en formación interesadas cuya oferta no fuera seleccionada en el proceso de licitación, podrán impugnar la decisión firme en la vía judicial conforme a lo legalmente establecido.

ARTÍCULO 10

1.- Las personas naturales para ser socios de una cooperativa deben reunir los requisitos siguientes:

- a) Tener 18 años de edad;
- b) ser residente permanente en Cuba; y
- c) estar apto para realizar labores productivas o de servicios de las que constituyen su actividad.

2. Cuando la forma de la cooperativa sea la prevista en el inciso c) del artículo 6 del presente Decreto-Ley, tendrán preferencia para ser socios fundadores los trabajadores de esas entidades.

3. La decisión sobre la incorporación de un nuevo socio a una cooperativa corresponde a la Asamblea General, según lo previsto en el Reglamento del presente Decreto-Ley.

CAPÍTULO II

ARTÍCULO 11

1.- En los casos de cooperativas que pretendan crearse al amparo de los incisos a) y b) del artículo 6 del presente Decreto-Ley, los aspirantes a socios fundadores presentarán su solicitud a los respectivos órganos locales del Poder Popular, organismos o entidades nacionales que rigen las actividades en que se prevén enmarcar.

2. En el caso de las cooperativas que pretenden crearse al amparo del inciso c) del propio artículo 6 del presente Decreto-Ley, la propuesta se realiza por los órganos locales, organismos o entidades nacionales cuyas empresas o unidades presupuestadas administran los bienes estatales que se interese gestionar de forma cooperativa.

ARTÍCULO 12

1.- Los órganos locales del Poder Popular, organismos o entidades nacionales a que se refiere el artículo anterior presentan a la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, las solicitudes de creación de cooperativas, para que dicha Comisión las evalúe y presente al Consejo de Ministros la propuesta de inicio del proceso en las entidades correspondientes.

2. Aprobada la propuesta por el Consejo de Ministros y cumplidos los requisitos establecidos en el Reglamento del presente Decreto-Ley, se dicta la autorización para la constitución de cada cooperativa, atendiendo a las reglas siguientes:

- a) en el caso de los incisos a) y b) del artículo 6 del presente Decreto-Ley, por la máxima autoridad del organismo rector de la actividad, oído el parecer de los órganos locales del Poder Popular; y

- b) en el supuesto del inciso c) del propio artículo 6, por la máxima autoridad del órgano, organismo o entidad nacional cuyas empresas o unidades presupuestadas administren los bienes, en consulta con el organismo rector cuando corresponda.

ARTÍCULO 13

1.- La autorización de la constitución se emite mediante disposición fundada de la autoridad competente, la que contendrá las actividades de producción y servicios que se autoriza a realizar según corresponda, y cualquier otra regulación que resulte necesaria.

2. El órgano, organismo y entidad nacional que autorice la constitución de las cooperativas es responsable directo del control y evaluación de su funcionamiento.

ARTÍCULO 14.- La constitución de la cooperativa se formaliza mediante escritura pública ante Notario, como requisito esencial para su validez, y adquiere personalidad jurídica a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

ARTÍCULO 15.- Las cooperativas no podrán fusionarse, extinguirse, escindirse, ni modificarse sin la previa aprobación del órgano, organismo o entidad nacional que autorizó su constitución.

ARTÍCULO 16.- El procedimiento de constitución de las cooperativas se regula en el Reglamento del presente Decreto-Ley.

CAPÍTULO III

ARTÍCULO 17

- 1.- El órgano superior de dirección de la cooperativa es su Asamblea General, de la cual forman parte todos los socios.
2. Compete a la Asamblea General elegir de entre sus socios a su Presidente, su sustituto y a su Secretario, mediante el voto secreto y directo.
3. La cooperativa, de acuerdo a sus características contará con un administrador o un consejo administrativo, designados por su Asamblea General.
4. Cuando se requiera, atendiendo a la cantidad de socios, la Asamblea General podrá elegir una Junta Directiva, que será dirigida por su Presidente.

ARTÍCULO 18

- 1.- Las cooperativas podrán disponer la constitución de sus órganos de dirección y administración en correspondencia con la complejidad de su actividad y cantidad de socios, tomando como referencia los siguientes criterios:
 - a) las cooperativas de hasta veinte socios podrán elegir un Administrador;
 - b) las cooperativas de más de veinte y hasta sesenta socios podrán elegir un Consejo Administrativo; y
 - c) las cooperativas que posean más de sesenta socios podrán elegir un Consejo Administrativo y una Junta Directiva.
2. La organización y funcionamiento de los órganos de dirección y administración de las cooperativas se establece en el Reglamento del presente Decreto-Ley.

ARTÍCULO 19.- Las funciones de control y fiscalización que conciernen a toda cooperativa, cualquiera que sea su cantidad de miembros estarán a cargo de un socio o una Comisión de Control y Fiscalización designados por la Asamblea General, teniendo en cuenta la cantidad de socios y complejidad de la actividad.

CAPÍTULO IV

ARTÍCULO 20.- Las cooperativas aplican normas específicas de contabilidad y elaboran sus planes de ingresos y gastos en correspondencia con el nivel de producción y servicios proyectado, tomando en cuenta los vínculos contractuales que establezcan con las empresas, unidades presupuestadas y demás formas de gestión económica.

ARTÍCULO 21

- 1.- Para la constitución de una cooperativa se requiere un capital de trabajo inicial, que le permita sostener sus operaciones al nivel previsto.

2. El capital de trabajo inicial se constituye a partir del aporte dinerario que realizan los socios y de los créditos bancarios que se otorguen con ese objetivo.

ARTÍCULO 22.- El patrimonio de la cooperativa está integrado por el capital de trabajo inicial y todos los demás bienes y derechos cuya titularidad adquiere la cooperativa de forma lícita.

ARTÍCULO 23.- Los socios de la cooperativa, con independencia de cualquier otro aporte que hagan, están en la obligación de participar con su trabajo.

ARTÍCULO 24

1.- Al final de cada ejercicio fiscal se determinan las utilidades a distribuir en cada cooperativa.

2. Las especificidades concernientes a la distribución de utilidades se establecen en sus estatutos tomando en cuenta lo que al respecto regule el Reglamento del presente Decreto-Ley.

ARTÍCULO 25.- Los precios y tarifas de los productos y servicios que comercialicen las cooperativas se determinan por estas, según la oferta y la demanda, excepto aquellos que se establecen por los órganos estatales competentes.

CAPÍTULO V

ARTÍCULO 26

1.- Las cooperativas pueden contratar trabajadores asalariados hasta tres meses en el período fiscal, para las actividades y tareas que no puedan asumir los socios en determinado período de tiempo.

2, La contratación a que se refiere el apartado anterior no excederá el 10 % del total de las jornadas-socios del período fiscal, conforme establece el Reglamento del presente Decreto-Ley.

3. Los trabajadores asalariados que se contraten reciben su retribución y demás derechos, incluyendo los de la seguridad social, de acuerdo con lo que establece la legislación laboral común vigente.

4. Al expirar el período de tres meses a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, si la cooperativa continúa necesitando el servicio del trabajador asalariado, podrá darle la opción de solicitar su ingreso como socio; de no aceptarla, cesará la relación laboral.

5. El tratamiento laboral y salarial a los trabajadores asalariados comprendidos en el artículo 6, inciso c) del presente Decreto- Ley, que no hayan arribado a la edad de 18 años, se regula en el Reglamento del presente Decreto-Ley.

CAPÍTULO VI

ARTÍCULO 27.- Los conflictos que surjan entre los socios de la cooperativa y entre aquellos y la cooperativa, con motivo de la ejecución de las actividades autorizadas, y de la interpretación y aplicación del presente Decreto-Ley y su Reglamento, se resuelven primeramente mediante la negociación amigable entre las partes del conflicto.

ARTÍCULO 28.- Transcurridos sesenta (60) días naturales contados a partir del inicio de la negociación amigable, sin arribarse a un acuerdo, el conflicto podrá someterse al conocimiento de los órganos de dirección o administración de la cooperativa; agotada esta vía, queda expedita la acción judicial, según la naturaleza del conflicto.

ARTÍCULO 29.- El Reglamento del presente Decreto-Ley dispondrá los términos y formalidades para la tramitación de la solución de conflictos a que se refiere el presente Capítulo, así como los que surjan entre la cooperativa y los trabajadores contratados.

CAPÍTULO VII

ARTÍCULO 30.- El proceso de extinción de una cooperativa comprende las fases de disolución y de liquidación.

ARTÍCULO 31.- La cooperativa se disuelve por cualesquiera de las causas siguientes:

- a) Por las previstas en sus Estatutos;
- b) por imposibilidad de cumplir con la actividad autorizada o agotamiento de esta;
- c) vencimiento del término del usufructo o arrendamiento;
- d) revocación de la autorización concedida ante incumplimientos de los fines y principios que sustentaron la constitución de la cooperativa;
- e) por mandato judicial; y
- f) por cualquier otra causa legalmente establecida que produzca estos efectos.

ARTÍCULO 32.- La disolución de la cooperativa implica el cese de sus actividades y el inicio del proceso de liquidación de su patrimonio, los que se realizan conforme a lo establecido en el Reglamento del presente Decreto-Ley.

DISPOSICIONES ESPECIALES

PRIMERA: Para la creación de las cooperativas previstas en el inciso c) del artículo 6, al extinguirse el establecimiento, sus trabajadores se declaran disponibles y se les aplican las disposiciones laborales y salariales vigentes.

SEGUNDA: Las entidades que actualmente suministran insumos o prestan servicios para actividades económicas que se decida gestionar de forma cooperativa, continuarán suministrándolos o prestándolos mediante contratos, de acuerdo con la política comercial y de precios sin subsidios establecida, hasta tanto se desarrollen otros mercados o fuentes de suministros o servicios, siempre que la economía lo permita.

TERCERA: Lo dispuesto en el presente Decreto-Ley es de aplicación a las sociedades mercantiles de capital totalmente cubano en las que se decida gestionar de forma cooperativa su actividad.

CUARTA: Lo dispuesto en el presente Decreto-Ley será de aplicación en lo que corresponda, a las cooperativas de segundo grado.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: La Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, queda encargada de conducir el proceso de creación de las cooperativas y su funcionamiento, e informará los resultados de dicho proceso al Consejo de Ministros, anualmente a partir de la aplicación del presente Decreto-Ley.

SEGUNDA: El Ministro de Finanzas y Precios dictará las regulaciones de precios, patrimonio y contabilidad para las cooperativas reguladas por el presente Decreto-Ley.

TERCERA: Facultar al Ministerio de Finanzas y Precios para crear el Fondo en Fideicomiso Público, administrado por los bancos, con el objetivo de financiar el capital de trabajo inicial y otros bienes que se determine vender a las cooperativas no agropecuarias, en los casos que no resulten sujetos de créditos bancarios. Anualmente en la Ley del Presupuesto del Estado se determinará el monto del Fondo en Fideicomiso Público.

CUARTA: Se faculta al Ministro de Economía y Planificación para establecer el procedimiento de la licitación.

QUINTA: El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular dictará, en el término de treinta (30) días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto-Ley, las disposiciones que se requieran a los efectos de instruir sobre el procedimiento de impugnación de los procesos de licitación.

SEXTA: El Consejo de Ministros, una vez que entre en vigor el presente Decreto-Ley, emite el Reglamento para las cooperativas de primer grado, y en el plazo de trescientos sesenta (360) días dictará el Reglamento para las cooperativas de segundo grado.

SÉPTIMA: El presente Decreto-Ley comienza a regir a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.

DADO en el Palacio de la Revolución, en La Habana, a los quince días del mes de noviembre de 2012.

Presidente del Consejo de Estado

• **DECRETO-LEY 306/12**

Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.

HAGO SABER: Que el Consejo de Estado ha considerado lo siguiente:

POR CUANTO: La Ley número 105 de 27 de diciembre de 2008, "Ley de Seguridad Social", en su artículo 5 dispone la protección, mediante regímenes especiales de seguridad social, a las personas que realizan actividades en las que, por su naturaleza o por la índole de sus procesos productivos o de servicios, requieren adecuar los beneficios de la seguridad social a sus condiciones.

POR CUANTO: Mediante el Decreto-Ley número 305, "De las Cooperativas no Agropecuarias", de 15 de noviembre de 2012 se autorizó la constitución, de forma experimental, de estas cooperativas en los diferentes sectores que se determinen, por lo que resulta necesario establecer un régimen especial de seguridad social que proteja a sus socios, mientras sea evaluado el resultado de la aplicación de dicha experiencia.

POR TANTO: El Consejo de Estado, en el ejercicio de las atribuciones que le han sido conferidas por el inciso c) del artículo 90 de la Constitución de la República de Cuba, adopta el siguiente:

CAPÍTULO I

ARTÍCULO 1.- Se establece un régimen especial de seguridad social dirigido a la protección de los cooperativistas asociados en cooperativas no agropecuarias, en lo adelante cooperativistas, que no son sujetos del régimen general de seguridad social o cualquier otro régimen especial.

ARTÍCULO 2.- El régimen especial de seguridad social que por este Decreto-Ley se establece protege a los cooperativistas en los casos de enfermedad y accidente de origen común o profesional, maternidad, invalidez total, vejez, y en caso de muerte, protege a su familia.

ARTÍCULO 3.- La afiliación al régimen es obligatoria para los sujetos del presente Decreto-Ley y constituye un requisito indispensable para que pueda recibir los beneficios de la seguridad social.

ARTÍCULO 4.- A los efectos de recibir los beneficios regulados en el presente Decreto-Ley, se considera que el cooperativista se encuentra en activo como contribuyente al régimen, si no adeuda cotizaciones por un período superior a seis meses.

CAPÍTULO II

ARTÍCULO 5.- El Órgano de la Administración de la Cooperativa, tiene la responsabilidad de garantizar la afiliación al régimen especial de seguridad social del cooperativista.

ARTÍCULO 6.- La afiliación se formaliza con la inscripción del cooperativista en el Registro Nacional de Seguridad Social, en lo adelante Registro, que obra en la Filial Municipal del Instituto Nacional de Seguridad Social correspondiente al domicilio social de la cooperativa, a partir de la fecha de su ingreso.

En el acto de afiliación al régimen se registra la base de contribución seleccionada por el cooperativista.

ARTÍCULO 7.- Para la inscripción en el Registro el cooperativista presenta los documentos siguientes:

- a) Carné de identidad;
 - b) certificación expedida por el Órgano de la Administración de la Cooperativa, según corresponda, que avale su condición;
 - c) las certificaciones que obren en poder del cooperativista que acrediten su contribución a la seguridad social, si con anterioridad se encontraba afiliado a otro régimen especial;
 - d) expediente laboral y los documentos de tiempo de servicios y salarios devengados, cuando en algún período tuvo la condición de trabajador asalariado; y
 - e) expediente de cooperativista, confeccionado por la dirección de la Cooperativa de Producción Agropecuaria, que contenga los documentos de tiempo de servicios y anticipos y utilidades devengados, si con anterioridad estuvo vinculado a esta.
- Si el expediente al que se hace referencia en los incisos d) y e), no se encuentra en poder del cooperativista, presenta en la última entidad o cooperativa en que laboró, una certificación del Órgano de la Administración de la Cooperativa que acredite su condición de miembro, a fin de que se le entregue el expediente en un término que no exceda los treinta días hábiles siguientes a su solicitud.

ARTÍCULO 8.- El Registro debe contener los datos siguientes:

- a) Nombre (s) y apellidos;
- b) sexo;
- c) número de identidad;
- d) domicilio;
- e) fecha de inscripción en el Registro;
- f) base de contribución seleccionada; y
- g) variaciones de la base de contribución seleccionada

ARTÍCULO 9.- La fecha en la que el cooperativista se inscribe en el Registro, se considera como la de alta en este régimen.

ARTÍCULO 10.- El director de la Filial Municipal del Instituto Nacional de Seguridad Social, le hace entrega al cooperativista del carné de afiliado al régimen, dentro del término de los siete (7) días hábiles siguientes a la fecha de su inscripción en el Registro, en el que constan nombres y apellidos, número de identidad, domicilio, fecha de inscripción en el Registro y el número de afiliado que lo identifica. Este carné es válido para el inicio del pago de las cuotas que corresponde aportar al afiliado como contribución al Régimen de Seguridad Social.

ARTÍCULO 11.- El cooperativista está obligado a inscribirse en el Registro del Contribuyente de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria de su domicilio fiscal dentro del plazo establecido en las disposiciones que rigen el funcionamiento de dicho Registro; para ello debe mostrar los documentos siguientes:

- a) Carné de afiliado; y
- b) certificación del director de la Filial Municipal del Instituto Nacional de Seguridad Social, en la que conste la base de contribución seleccionada en el acto de su afiliación.

ARTÍCULO 12.- El cooperativista está en la obligación de suministrar a la Filial Municipal del Instituto Nacional de Seguridad Social la información para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los artículos anteriores, así como los cambios que se produzcan en los datos registrados al momento de realizar su afiliación al régimen.

ARTÍCULO 13.- Cuando el trabajador causa baja del régimen, el Director de la Filial Municipal del Instituto Nacional de Seguridad Social le expide una certificación en la que consta:

- a) Fecha de afiliación al régimen;
- b) fecha en que causó baja como afiliado; y
- c) base de contribución de hasta los últimos quince años de afiliación.

ARTÍCULO 14.- Cuando el cooperativista ejerce simultáneamente una labor que, por su naturaleza, se encuentra comprendida en otro régimen especial de Seguridad Social, puede optar por acogerse a dicho régimen o al que se establece por el presente Decreto-Ley.

CAPÍTULO III

ARTÍCULO 15.- Las prestaciones reguladas por el presente Decreto-Ley se financian con la contribución de los cooperativistas y se abonan con cargo al presupuesto de la seguridad social.

ARTÍCULO 16.- El Órgano de la Administración de la Cooperativa tiene la responsabilidad de garantizar el aporte al Fisco de la contribución a la seguridad social de los cooperativistas. A estos efectos, efectúa las retenciones de los anticipos, utilidades u otros ingresos de los cooperativistas.

ARTÍCULO 17.- A los fines señalados en el artículo 15, la contribución del cooperativista es del 20 por ciento (20 %) de la base de contribución seleccionada por este de la escala siguiente:

350
500
700
900
1 100
1 300
1 500
1 700
2 000

ARTÍCULO 18.- El pago de los subsidios por enfermedad o accidente se abona con cargo a la retención que efectúa el Órgano de la Administración de la Cooperativa del 1.5 por ciento de la contribución que realiza el cooperativista a la seguridad social.

Con la referida retención el Órgano de la Administración de la Cooperativa mantiene un fondo destinado a estos fines, el que no puede ser utilizado para objetivos distintos a los establecidos en el presente artículo.

ARTÍCULO 19.- Cuando el porcentaje establecido en el artículo anterior no resulte suficiente para cubrir los gastos a que está destinado, el Órgano de la Administración de la Cooperativa puede aportar cantidades adicionales con cargo a sus fondos.

ARTÍCULO 20.- La cuantía de las pensiones se determina sobre el promedio de la base de contribución mensual de los últimos quince (15) años naturales anteriores a su solicitud. Si dentro de este período el cooperativista tuvo la condición de asalariado, fue miembro de una cooperativa de producción agropecuaria o sujeto de otro régimen especial, se adicionan a la base de cálculo, los salarios, ingresos percibidos o la base de contribución, según corresponda.

ARTÍCULO 21.- El cooperativista solo puede seleccionar la base de contribución de la escala referida en el artículo 17 del presente Decreto-Ley, aunque se encuentre vinculado a varias cooperativas.

ARTÍCULO 22.- El cooperativista puede variar la base de contribución seleccionada. La solicitud de modificación se formula ante el Órgano de la Administración de la Cooperativa dentro del último trimestre del año natural, para que comience a contribuir por la nueva base en el mes de enero del año siguiente.

ARTÍCULO 23.- Al cooperativista se le exime del pago de la contribución a la seguridad social y se mantiene afiliado al régimen, si concurren las causas siguientes:

a) La maternidad de la cooperativista durante el período en que se encuentra disfrutando de la prestación económica y social;

- b) la incapacidad para el trabajo por enfermedad o accidente, debidamente avalada por la autoridad facultada;
- c) las movilizaciones militares, por períodos superiores a un mes, acreditado por la autoridad competente.

ARTÍCULO 24.- El Órgano de la Administración de la Cooperativa informa trimestralmente a la Oficina Nacional de Administración Tributaria del municipio donde está domiciliada la cooperativa:

- a) La relación de cooperativistas inscritos y las bajas durante el período;
- b) las modificaciones en la base de contribución efectuadas por los trabajadores; y
- c) los cooperativistas que se encuentran eximidos del pago de la contribución.

ARTÍCULO 25.- La Oficina Nacional de Administración Tributaria entrega mensualmente al Instituto Nacional de Seguridad Social, la información de la contribución al régimen realizada por cada uno de los cooperativistas, así como la certificación que la avale.

ARTÍCULO 26.- A los efectos de conceder el derecho a la licencia retribuida por maternidad y a las pensiones establecidas en el presente Decreto-Ley, se equiparan como tiempo de contribución los siguientes:

- a) El período en que la cooperativista disfruta de las prestaciones por maternidad;
- b) el período durante el cual el cooperativista percibe subsidio por enfermedad o accidente;
- c) las movilizaciones militares;
- d) el período en que el cooperativista tuvo la condición de trabajador asalariado;
- e) el prestado por los jóvenes llamados al Servicio Militar Activo; y
- f) el de contribución a otro régimen especial de Seguridad Social.

El cooperativista tiene la responsabilidad de custodiar y presentar, para acceder a las prestaciones que se establecen en el presente Decreto-Ley, los documentos establecidos para el régimen general de seguridad social y los regímenes especiales, que acreditan los períodos señalados en el presente artículo.

CAPÍTULO IV

ARTÍCULO 27.- El pago del subsidio por enfermedad o accidente se realiza al cooperativista que se encuentra en servicio activo, una vez acreditada la enfermedad o la lesión mediante certificado médico.

ARTÍCULO 28.- El cooperativista que se enferme o accidente tiene derecho a recibir, durante el período de su invalidez temporal, un subsidio diario, excluyendo los días de descanso semanal, equivalente a un porcentaje del ingreso base de contribución por el que aportó al presupuesto de la seguridad social en el año natural anterior a la enfermedad o lesión, de acuerdo con las normas siguientes:

	50 % 70 %
a) Si estuviera hospitalizado	
	60 % 80 %
b) Si no estuviera hospitalizado	

Si el cooperativista tiene menos de doce meses de incorporado a la cooperativa, la cuantía de la prestación monetaria se fija teniendo en cuenta la base de contribución de la escala referida en el artículo 17 por él seleccionada.

ARTÍCULO 29.- El cooperativista recibe el subsidio por el término de hasta seis meses consecutivos, prorrogables a seis meses más, si la Comisión de Peritaje Médico Laboral dictamina que puede obtener su curación en este término.

Al cooperativista que presenta determinada patología y requiere de un tratamiento diferenciado, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Nacional de Peritaje Médico Laboral, se le extiende el término de un año para el derecho a percibir el subsidio establecido en el presente Decreto-Ley, por el período que determine la referida Comisión.

Excepcionalmente, puede extenderse el referido término para el derecho al cobro del subsidio si por requerimientos especiales del proceso de rehabilitación, así lo determina la Comisión Provincial de Peritaje Médico Laboral.

ARTÍCULO 30.- El subsidio por enfermedad o accidente se paga durante el período de invalidez para el trabajo y hasta que cause alta médica, dentro del límite señalado en el artículo anterior y se comienza a percibir a partir del cuarto día laborable de incapacidad temporal, salvo que:

a) El cooperativista sea hospitalizado antes del cuarto día, en cuyo caso se paga desde el momento de la hospitalización;

b) se trate de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, en que se paga desde el primer día de la incapacidad laboral.

ARTÍCULO 31.- El pago del subsidio se suspende si el enfermo o accidentado no presenta el certificado médico que justifica su enfermedad, si realiza cualquier actividad remunerada o, si encontrándose sujeto a tratamiento de rehabilitación física, psíquica o laboral, establecido por prescripción facultativa se niega, sin causa justificada, a observar las indicaciones médicas.

ARTÍCULO 32.- El derecho a la protección de la maternidad de la cooperativista se rige por la legislación que regula la protección a la maternidad de la trabajadora asalariada.

ARTÍCULO 33.- Para realizar el cálculo de las prestaciones por maternidad a que tenga derecho la cooperativista, se considera la base de contribución por la que aportó al presupuesto de la seguridad social en los doce meses anteriores al inicio del disfrute de la prestación. Si dentro de este período la cooperativista tuvo la condición de asalariada, se incluyen en la base de cálculo los salarios percibidos.

Si la cooperativista tiene menos de doce meses de incorporada al trabajo, la prestación monetaria se calcula sobre el ingreso base por el que se encuentra contribuyendo en la fecha que le corresponde recibir la prestación.

CAPÍTULO V

ARTÍCULO 34.- Se considera que el cooperativista es inválido total cuando la Comisión de Peritaje Médico Laboral dictamina que presenta una disminución de su capacidad física o mental, o ambas, que le impide continuar trabajando.

ARTÍCULO 35.- Son requisitos para obtener la pensión por invalidez total:

a) Que el cooperativista se encuentre en activo como contribuyente a la seguridad social al dictaminarse la invalidez por la Comisión de Peritaje Médico Laboral; y

b) haber contribuido al presente régimen el tiempo mínimo que, según la edad, se establece en la escala siguiente:

Hasta	31	años de edad	3	años de servicios
de	32-34	" " "	4	" " "
"	35-37	" " "	5	" " "
"	38-40	" " "	6	" " "
"	41-43	" " "	7	" " "
"	44-46	" " "	8	" " "
"	47-49	" " "	9	" " "
"	50-52	" " "	10	" " "
"	53-55	" " "	12	" " "
"	56-58	" " "	14	" " "
"	59-61	" " "	16	" " "
"	62-64	" " "	18	" " "
"	65 y más	" " "	20	" " "

A partir de los 50 años las mujeres solo requieren acreditar 10 años de contribución al régimen.

ARTÍCULO 36.-El cooperativista que se desvincule tiene derecho a la pensión por invalidez total, si se determina que su incapacidad se originó con anterioridad a los sesenta días de cesar en su labor o si la Comisión de Peritaje Médico La-boral determina que la enfermedad o lesión fue adquirida encontrándose en activo como contribu-yente al régimen especial.

ARTÍCULO 37.- La cuantía de la pensión por invalidez total se fija, aplicando al promedio de la base de contribución mensual establecido en el artículo 20, los porcentajes siguientes:

- a) 50 por ciento (50 %) si acredita hasta 20 años de contribución; y
- b) por cada año de contribución en exceso de 20, se incrementa la pensión en el uno por ciento (1 %) del promedio hasta alcanzar el sesenta por ciento (60 %).

ARTÍCULO 38.- El cooperativista que, como consecuencia de un accidente o enfermedad, presente una invalidez tal que requiera la ayuda constante de otra persona, recibe un incremento de un 20 por ciento (20 %) hasta alcanzar el sesenta por ciento (60 %) señalado en el artículo anterior.

CAPÍTULO VI

ARTÍCULO 39.- La pensión por edad puede ser ordinaria o extraordinaria, de acuerdo con los requisitos que se establecen para su concesión en el presente Decreto-Ley.

ARTÍCULO 40.- Para obtener la pensión ordinaria se requiere:

- a) Tener la mujer sesenta (60) años o más de edad y el hombre sesenta y cinco (65) años o más de edad;
- b) acreditar no menos de treinta (30) años de servicios; y
- c) encontrarse en activo como contribuyente a la seguridad social al momento de cumplir ambos requisitos.

ARTÍCULO 41.- Para obtener la pensión extraordinaria se requiere:

- a) Tener la mujer sesenta (60) años o más de edad y el hombre sesenta y cinco (65) años o más de edad;
- b) acreditar no menos de veinte (20) años de servicios; y
- c) encontrarse en activo como contribuyente a la seguridad social al momento de cumplir los requisitos señalados en los incisos anteriores.

ARTÍCULO 42.- El cooperativista que se desvincule puede solicitar la pensión por edad en cualquier momento, si en la fecha que cesó como tal reunía los requisitos establecidos para obtener dicha pensión.

ARTÍCULO 43.- La cuantía de la pensión ordinaria por edad se fija en el sesenta por ciento (60 %) del promedio establecido en el artículo 20 del presente Decreto-Ley.

ARTÍCULO 44.- La cuantía de la pensión extraordinaria por edad se fija en el cincuenta por ciento (50 %) del promedio establecido en el artículo 20; por cada año que exceda de veinte (20), se incrementa en un uno por ciento (1 %) hasta alcanzar el sesenta por ciento (60 %).

CAPÍTULO VII

ARTÍCULO 45.- La muerte del cooperativista o del pensionado o la presunción de su fallecimiento por desaparición, conforme a los procedimientos legalmente establecidos, origina el derecho a pensión de sus familiares de acuerdo con las disposiciones y procedimientos establecidos en la Ley número 105 de 27 de diciembre de 2008, "Ley de Seguridad Social", y su Reglamento.

ARTÍCULO 46.- Para que el cooperativista genere derecho a la pensión por causa de muerte, solo es necesario que se haya encontrado en activo como contribuyente al régimen, al momento de su fallecimiento.

ARTÍCULO 47.- Para determinar la cuantía de la pensión a que tienen derecho los familiares del cooperativista fallecido, se considera como pensión básica la que resulte de aplicar las reglas que fijan la cuantía de la pensión ordinaria o extraordinaria por edad, siempre que este hubiera cumplido los requisitos establecidos para ella o, en su defecto, la que resulte de aplicar las reglas de la pensión por invalidez total, sin exigirse el tiempo mínimo de contribución establecido en el inciso b) del artículo 35 del presente Decreto-Ley.

CAPÍTULO VIII

ARTÍCULO 48.- El Órgano de la Administración de la Cooperativa con respecto a este régimen especial de seguridad social, tiene a su cargo la gestión administrativa de:

- a) Garantizar la afiliación de los cooperativistas al régimen especial de seguridad social;
- b) la retención de los aportes correspondientes a la contribución individual de los cooperativistas al presupuesto de la seguridad social;
- c) la retención, control y preservación del 1.5 por ciento de la contribución que realiza el cooperativista a la seguridad social, a los fines del pago de los subsidios por enfermedad o accidente;

d) informar al Director de la Filial Municipal del Instituto Nacional de Seguridad Social correspondiente, los designados y sus sustitutos para realizar el trámite de los expedientes de pensión, así como su actualización, de producirse cambios;

e) otorgar y pagar los subsidios por enfermedad y accidente de origen común o profesional;

f) solicitar a la filial municipal del Instituto Nacional de Seguridad Social que expida las órdenes de pago de la prestación económica y social en los casos de licencia por maternidad;

g) solicitar a las comisiones de Peritaje Médico Laboral el examen de los subsidiados por un período de hasta seis (6) meses o de acuerdo con la recomendación del médico de asistencia;

h) formar y presentar los expedientes de pensión por edad o invalidez total de los cooperativistas;

i) formar y presentar los expedientes de pensión por causa de muerte, de los familiares del cooperativista fallecido; y

j) presentar las pruebas solicitadas por el Director de la Filial Municipal del Instituto Nacional de Seguridad Social y colaborar en la práctica de las investigaciones realizadas por dicha institución.

Los trámites para formar y presentar los expedientes de pensión a que se refieren los incisos h) e i) se realizan dentro del término de siete (7) días hábiles siguientes a la fecha de solicitud de la pensión. En caso de que los expedientes sean devueltos por la Filial Municipal del Instituto Nacional de Seguridad Social por presentar deficiencias, deben ser subsanadas dentro de un término no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes al de la fecha de la devolución.

ARTÍCULO 49.- El Director de la Filial Municipal del Instituto Nacional de Seguridad Social, además de las funciones establecidas en la legislación correspondiente, tiene las siguientes:

a) Expedir las órdenes de pago de la prestación económica y social en los casos de licencia por maternidad;

b) tramitar las solicitudes de pensión que se formulen;

c) examinar los expedientes de pensión por invalidez total, por edad y por causa de muerte del cooperativista y elevarlos a la instancia superior en el término de quince (15) días hábiles siguientes a su recepción;

d) devolver a la cooperativa dentro del término de quince (15) días hábiles siguientes a su recepción los expedientes que presentan deficiencias, a fin de que sean subsanadas;

e) formar y presentar los expedientes de pensión por invalidez total o edad de los cooperativistas desvinculados que reúnen los requisitos establecidos en los artículos 35, 40 y 41, respectivamente, del presente Decreto-Ley;

f) formar y presentar los expedientes de pensión por causa de muerte de los familiares del pensionado;

g) expedir las órdenes de pago de la pensión provisional, en los casos de fallecimiento de los pensionados por invalidez total o por edad y de los cooperativistas;

h) tramitar los incidentes que formulen los pensionados, o de oficio, según proceda;

i) notificar al cooperativista, y a la cooperativa, la Resolución dictada en el expediente de pensión; y

j) tramitar la solicitud de proceso de revisión pre-sentada por el cooperativista ante el Director General del Instituto Nacional de Seguridad Social.

PRIMERA: El Consejo de Ministros, a propuesta de los ministros de Finanzas y Precios y de Trabajo y Seguridad Social, puede modificar la cuantía de la contribución al presupuesto de la Seguridad Social y la escala de la base de contribución establecida en el presente Decreto-Ley.

SEGUNDA: Se faculta al Ministro de Trabajo y Seguridad Social para conceder, excepcionalmente, pensiones sin sujeción a los requisitos, términos y cuantías establecidos en el presente Decreto-Ley. Esta facultad se ejerce después de un análisis colegiado y colectivo en el Consejo de Dirección del organismo, según lo previsto en el Decreto número 283, de 6 de abril de 2009, "Reglamento de la Ley de Seguridad Social".

TERCERA: El procedimiento para la concesión, pago, modificación, suspensión y extinción del subsidio y de las pensiones se rige por las disposiciones establecidas en la Ley número 105, de 27 de diciembre de 2008, "Ley de Seguridad Social", y su Reglamento, el Decreto número 283, de 6 de abril de 2009.

PRIMERA: Se faculta a los ministros de Trabajo y Seguridad Social, de Finanzas y Precios, y de Salud Pública, para que dicten las disposiciones que se requieran para la mejor aplicación del presente Decreto-Ley.

SEGUNDA: El presente Decreto-Ley comienza a regir a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.

DADO en el Palacio de la Revolución, en La Habana, a los diecisiete días del mes de noviembre de 2012.

Presidente del Consejo de Estado

• **DECRETO 309**

POR CUANTO: El Decreto-Ley número 305, de 15 de noviembre de 2012, "De las Cooperativas no Agropecuarias", en su Disposición Final Sexta dispone que el Consejo de Ministros, una vez que entre en vigor el referido Decreto-Ley, emite el Reglamento para las Cooperativas de primer grado.

POR TANTO: El Consejo de Ministros en el ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el artículo 98, inciso k) de la Constitución de la República de Cuba, decreta lo siguiente:

C A P Í T U L O I

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento establece con carácter experimental el procedimiento para la constitución, registro, funcionamiento y extinción de las Cooperativas no Agropecuarias de primer grado, en lo adelante Cooperativas, cuya creación autoriza el Decreto-Ley número 305, de 15 de noviembre de 2012, "De las Cooperativas no Agropecuarias", en lo adelante Decreto-Ley.

ARTÍCULO 2.- Las Cooperativas están sujetas a la supervisión y control del cumplimiento de las regulaciones tributarias, de precios, contables y otras que les resulten de aplicación.

CAPÍTULO II

SECCIÓN PRIMERA

ARTÍCULO 3.1.- Los aspirantes a socios fundadores interesados en constituir Cooperativas al amparo del artículo 6, incisos a) y b) del Decreto-Ley, en su solicitud deben expresar la actividad que pretenden realizar de forma cooperativa y el ámbito territorial en que se desarrollará.

2. Las solicitudes a que se refiere el apartado anterior se presentan ante las dependencias territoriales de los órganos municipales del Poder Popular. Las referidas solicitudes se trasladan, en todos los casos, a la Administración Provincial del Poder Popular que corresponda y esta a los organismos que rigen las actividades en que se proponen desarrollar las Cooperativas.

3. Los organismos que rigen las actividades en que se prevén enmarcar las Cooperativas, presentan la propuesta con sus consideraciones a la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo.

ARTÍCULO 4.- Las Cooperativas que pretendan constituirse al amparo del artículo 6, inciso c) del Decreto-Ley, los órganos locales del Poder Popular, organismos o entidades nacionales cuyas empresas o unidades presupuestadas administran los bienes en las que se prevé autorizar la gestión cooperativa, presentan la propuesta ante la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo con indicación de la entidad estatal administradora de los bienes, su domicilio legal y actividad económica que realiza.

ARTÍCULO 5.- La Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo evalúa las solicitudes de creación de Cooperativas a que se refieren los artículos 3 y 4 del presente Decreto y con sus consideraciones presenta al Consejo de Ministros la propuesta sobre su incorporación o no a la experiencia.

ARTÍCULO 6.1.- Adoptada la decisión por el Consejo de Ministros sobre el inicio del proceso de constitución experimental de la Cooperativa a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, los órganos municipales del Poder Popular correspondientes informarán a los aspirantes a socios.

2. En el caso de las Cooperativas a que se refiere el artículo 4 del presente Reglamento, los órganos locales del Poder Popular, organismos o entidades nacionales correspondientes, informan a la entidad que administra los bienes la aprobación emitida por el Consejo de Ministros, la que lo pondrá en conocimiento de sus trabajadores.

3. Si el establecimiento o instalación estatal cuya actividad se haya aprobado gestionar de forma cooperativa se encuentra inactiva, la entidad que lo administra realiza la convocatoria de licitación que establece el artículo 9 del Decreto-Ley.

SECCIÓN SEGUNDA

ARTÍCULO 7.1.- Se entiende por Cooperativa en Formación, al grupo de personas aspirantes a socios fundadores de una Cooperativa que se encargan de realizar gestiones y trámites para su constitución.

2. En tanto no se produzca la inscripción registral, los aspirantes a socios fundadores deberán añadir a la denominación de la Cooperativa que pretenden constituir, las palabras “en formación”.

ARTÍCULO 8.- Una vez que la Cooperativa esté en la fase de Cooperativa en Formación, los aspirantes a socios pueden conferir mandato simple o re-presentativo a uno o varios de ellos, o a terceros, para que gestionen, total o parcialmente, los datos, documentos y

trámites necesarios para llevar adelante el proceso de constitución de la Cooperativa. Cuando los designados sean varios se le denominará Comité Gestor.

ARTÍCULO 9.1.- Los órganos locales del Poder Popular, organismos o entidades nacionales a que se refieren los artículos 3 y 4 de este Reglamento, realizan de conjunto con el representante o el Comité Gestor de la Cooperativa en Formación las evaluaciones y negociaciones siguientes, según corresponda:

- a) Posible objeto social;
- b) diseño financiero;
- c) inmuebles y otros bienes a arrendar;
- d) medios, utensilios y herramientas a vender;
- e) bienes o servicios que constituyen el pedido estatal;
- f) los precios de bienes y servicios que se mantendrán centralmente establecidos;
- g) los proyectos de contratos de arrendamiento, usufructo, compraventa y otros;
- h) si procede, la determinación del período de exoneración del pago del arrendamiento;
- i) los insumos principales a suministrar;
- j) el impacto ambiental;
- k) el cumplimiento de normas y regulaciones sobre el ordenamiento territorial;
- l) el proyecto de estatutos; y
- m) otros aspectos que se consideren de interés.

2. Las evaluaciones a que se refiere el apartado anterior contarán con el asesoramiento y conducción de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo.

ARTÍCULO 10.- Los actos celebrados y los documentos suscritos a nombre de la Cooperativa en Formación, antes de adquirir la Cooperativa la personalidad jurídica, salvo los necesarios para el trámite ante el Registro Mercantil, hacen solidariamente responsables a quienes los celebraron o suscribieron por parte de aquella.

SECCIÓN TERCERA

ARTÍCULO 11.- Una vez concluidas las evaluaciones y negociaciones referidas en el artículo 9, los órganos locales del Poder Popular, organismos o entidades nacionales a que se refieren los artículos 3 y 4 de este Reglamento, dictan la disposición que autoriza la constitución de la Cooperativa, la cual contendrá como mínimo los aspectos siguientes:

- a) El objeto social que se autoriza y el tipo de moneda en que operará;
- b) denominación de la Cooperativa, que deberá incluir el vocablo “Cooperativa”;
- c) nombre de las personas solicitantes y de su representante;
- d) inmuebles y otros bienes a arrendar o ceder en usufructo u otra forma legal que no implique la transmisión de la propiedad, cuando corresponda;
- e) período por el cual se va a exonerar del pago del arrendamiento, si procede;
- f) medios, utensilios y herramientas a vender, cuando corresponda;
- g) bienes o servicios que constituyen el pedido estatal, cuando corresponda;
- h) los precios de bienes y servicios que se mantendrán centralmente establecidos, cuando corresponda; e
- i) insumos principales a suministrar, cuando corresponda.

ARTÍCULO 12.- Los socios de la Cooperativa pueden solicitar la prórroga del término del arrendamiento, usufructo u otra forma legal que no implique la transmisión de la propiedad

de los inmuebles y otros bienes, establecido en el artículo 7 del Decreto-Ley, a la autoridad competente que emitió la autorización para la constitución de la Cooperativa.

SECCIÓN CUARTA

ARTÍCULO 13.1.- Cuando se haya realizado la convocatoria a licitación a que se refiere el apartado 3 del artículo 6 de este Reglamento, los interesados son representados por el Comité Gestor o un representante de la Cooperativa en Formación.

Las Cooperativas ya constituidas interesadas en participar en esta licitación requieren la aprobación previa de la autoridad competente que emitió la autorización de constitución y serán representadas por su Presidente.

2. El representante o el Comité Gestor estará mandado para efectuar los trámites ante el licitante, cualquier otro relacionado con la convocatoria y otros que se determinen.

3. La Cooperativa o Cooperativa en Formación cuya oferta no fuera seleccionada en la licitación, podrá impugnar la decisión ante la Comisión de Licitación en el término de cinco (5) días hábiles. Contra la decisión firme podrá acudir a la vía judicial conforme a lo legalmente establecido.

4. Una vez resuelta la adjudicación de licitación la Cooperativa en Formación que no resulte titular de esta quedará sin efectos.

SECCIÓN QUINTA

ARTÍCULO 14.- El objeto social de la Cooperativa comprende las producciones, prestación de servicios o la actividad de comercialización, a que se dedicará de acuerdo con lo que se autorice.

ARTÍCULO 15.- Las Cooperativas cuyo objeto social de producción o de servicios se encuentre registrado comercialmente, se preste en unidades o establecimientos que formen parte o no de una red de producción o de servicios, contemplarán en los correspondientes contratos los respectivos estándares de productos y servicios, el uso de las marcas, lemas comerciales, signos distintivos y otros que correspondan.

SECCIÓN SEXTA

ARTÍCULO 16.1.- Dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a que se les notifique la disposición de autorización dictada por el órgano local del Poder Popular, organismo o entidad nacional correspondiente, se efectúa la constitución de la Cooperativa mediante escritura pública ante notario.

2. Al comparecer ante notario al efecto de formalizar la constitución de la Cooperativa, los aspirantes a socios fundadores manifiestan ante aquel su pretensión de asociarse y acompañan la autorización dictada por el órgano local del Poder Popular, organismo o entidad nacional correspondiente y los estatutos, los que se unen a la escritura pública.

En este propio acto se deja constancia del desembolso mediante certificaciones bancarias, que constituyen el capital de trabajo mínimo.

3. Transcurrido el término a que se refiere el apartado primero sin haberse otorgado la escritura de constitución de la Cooperativa, a solicitud de los aspirantes a socios fundadores o sus representantes, el órgano local del Poder Popular, organismo o entidad nacional que emitió la autorización, podrá prorrogar este plazo por treinta (30) días hábiles más.

ARTÍCULO 17.- En la escritura de constitución se consignan, además de los particulares previstos en la legislación, la denominación de la Cooperativa.

ARTÍCULO 18.- En la Asamblea Constitutiva se aprueban los estatutos y se eligen los miembros de los órganos de dirección, de administración y control.

ARTÍCULO 19.- Los gastos correspondientes al proceso de constitución corren a cargo de los aspirantes a socios fundadores.

SECCIÓN SÉPTIMA

ARTÍCULO 20.- Los estatutos contienen las regulaciones fundamentales para el funcionamiento de la Cooperativa. Se aprueban por los socios fundadores en la Asamblea Constitutiva y quedan incorporados a la escritura de constitución.

ARTÍCULO 21.- Los estatutos sin perjuicio de lo establecido en este Reglamento contendrán los aspectos siguientes:

- a) La denominación completa y, en su caso, abreviada;
- b) la duración;
- c) el objeto social;
- d) el domicilio social, con expresión de la dirección exacta;
- e) la cantidad mínima y máxima de socios, si se entiende preciso fijar uno u otro de esos límites, o ambos;
- f) los requisitos para ser socio;
- g) los derechos y deberes generales de los socios;
- h) el monto del aporte dinerario de cada socio al capital de trabajo;
- i) las causas que ocasionan la pérdida de la condición de socio;
- j) los órganos de dirección y de administración, su competencia y las reglas básicas de su funcionamiento;
- k) el régimen económico-financiero, en el cual se incluye, entre otros aspectos: sobre el patrimonio, los límites y formas de disposición de los bienes y derechos que lo integran, las reservas obligatorias y voluntarias, los seguros, las reglas internas de cobros y pagos y de contratación, así como las normas de contabilidad, de precios y tarifas, que aplicará;
- l) el régimen bancario, incluidas las personas facultadas para abrir y operar cuentas bancarias, el tipo de cuentas que pueden abrir, el modo de operarlas, y el modo de designar a las personas que podrán abrir, cerrar y operar esas cuentas;
- m) el sistema de retribución a los socios, basado en la cantidad, complejidad y calidad del trabajo;
- n) el régimen de los trabajadores eventuales;
- o) la forma en que efectuará su control interno;
- p) el régimen disciplinario, causales y procedimiento para la sanción;
- q) el régimen de solución de conflictos;
- r) el procedimiento para modificar los estatutos; y
- s) el procedimiento para la disolución y la liquidación.

ARTÍCULO 22.- La modificación de los estatutos se acuerda por la Asamblea General constituida con un quórum mínimo del 75 % de sus miembros y la votación favorable del 75 % de los asistentes, salvo en la Cooperativa de hasta veinte socios, en cuyos estatutos se podrán establecer otras reglas al respecto.

SECCIÓN OCTAVA

ARTÍCULO 23.- Otorgada la escritura de constitución se procede a inscribir la Cooperativa en el Registro Mercantil y en cualquier otro que su actividad demande, dentro de los plazos legalmente establecidos.

ARTÍCULO 24.- La modificación de los estatutos se formaliza mediante escritura pública, la que requiere inscribirse en el Registro Mercantil, se acompaña para ello la certificación del acuerdo y cualquier otro documento que exija el Registro.

ARTÍCULO 25.- La inscripción de las Cooperativas en el Registro Mercantil se publica en el Boletín del referido Registro.

CAPÍTULO III SECCIÓN PRIMERA

ARTÍCULO 26.- Cuando se trate de la constitución de una Cooperativa que prevea asumir total o parcialmente el objeto empresarial de una entidad y gestionar sus medios de producción, tendrán preferencia para ser socios fundadores los trabajadores de esas entidades.

ARTÍCULO 27.- Las personas naturales que deseen hacerse socios de una Cooperativa ya constituida, lo solicitan por escrito a la dirección de esta, declarando cumplir los requisitos que exigen el Decreto-Ley y los estatutos. Corresponde a la Asamblea General aprobar su incorporación lo que se formaliza mediante escritura pública.

SECCIÓN SEGUNDA

ARTÍCULO 28.- Además de los que puedan fijarse en los estatutos, los socios de la Cooperativa tienen los derechos siguientes:

- a) Participar con voz y voto en las asambleas generales de socios;
- b) recibir oportunamente los anticipos y las utilidades que les corresponda por el trabajo aportado, según lo establecido en los estatutos;
- c) elegir y ser elegido para desempeñar funciones administrativas en la Cooperativa;
- d) disfrutar del descanso, según establezcan los estatutos;
- e) conocer los estados de resultados de la gestión de la Cooperativa con la periodicidad que se acuerde en los estatutos;
- f) conocer y aprobar los planes económicos, estados financieros y las comprobaciones internas; y
- g) solicitar su baja como socio.

ARTÍCULO 29.- Además de los que se fijen en los estatutos, los socios de la cooperativa tienen los deberes siguientes:

- a) Cumplir con los estatutos y demás acuerdos de la Cooperativa;
- b) aportar su trabajo a la Cooperativa;
- c) contribuir al buen funcionamiento de la Cooperativa;
- d) mantener relaciones de ayuda mutua y de solidaridad; y
- e) cumplir el régimen disciplinario de la Cooperativa.

SECCIÓN TERCERA

ARTÍCULO 30.- La condición de socio se pierde por cualesquiera de las causas siguientes:

- a) Solicitud propia, previo al cumplimiento de sus obligaciones con la Cooperativa;
- b) fallecimiento o incapacidad total;
- c) acuerdo de la Asamblea General;
- d) pérdida de los requisitos para ser socio; y
- e) jubilación.

ARTÍCULO 31.- Los socios que por cualquier circunstancia prevista en los estatutos pierdan esta condición, tienen derecho al cobro de los anticipos pendientes de pago, de las utilidades y de los adeudos por los bienes vendidos a la Cooperativa que le correspondan hasta el día en que causen baja.

ARTÍCULO 32.- El derecho al cobro de las utilidades pendientes a distribuir y de los adeudos de los bienes vendidos a la Cooperativa correspondientes a los socios fallecidos, se transmiten a sus herederos.

CAPÍTULO IV

SECCIÓN PRIMERA

ARTÍCULO 33.1.- Los órganos de dirección, administración y control de las Cooperativas son: la Asamblea General, la Junta Directiva, el Consejo Administrativo o Administrador, y la Comisión de Control y Fiscalización.

2. Cuando los órganos tengan carácter colectivo se integran por un número impar de miembros.

3. Las reuniones de los órganos de las Cooperativas pueden ser ordinarias o extraordinarias, de las cuales se levanta acta y serán válidas con la asistencia de la mitad más uno de sus socios, salvo que en este Reglamento o en los estatutos se establezca otro quórum.

4. Los acuerdos para aprobar los planes internos y la elección de los órganos de dirección de la Cooperativa, serán válidos con la aprobación de la mitad más uno de los socios que la integran.

5. La forma de tomar los acuerdos se establece en los estatutos.

ARTÍCULO 34.1.- Las convocatorias para las reuniones de los órganos de dirección y administración contendrán el orden del día y se realizan con antelación suficiente; el resto de las formalidades se establecen en los estatutos.

2. Las reuniones a que se refiere el apartado anterior, deben fijarse en su respectiva programación anual, la cual se informa oportunamente a los de-más miembros por el Secretario.

ARTÍCULO 35.- Las Cooperativas con menos de veinte socios pueden simplificar en sus estatutos, la composición y las reglas de funcionamiento de sus órganos de administración.

SECCIÓN SEGUNDA

ARTÍCULO 36.1.- La Asamblea General es el órgano superior de dirección de la Cooperativa, se integra por todos los socios con voz y voto, y a cada uno corresponde un voto.

2. Compete a la Asamblea General elegir de entre sus socios a su Presidente, su sustituto y a su Secretario, mediante el voto secreto y directo, quienes ostentarán esos mismos cargos en la Junta Directiva, en los casos en los que este órgano se haya elegido.

3. Cuando excepcionalmente algún socio esté imposibilitado de asistir a la Asamblea General, en los estatutos se regulará la forma de representación.

ARTÍCULO 37.- La Asamblea General tiene las atribuciones siguientes:

- a) Elegir y revocar a su Presidente, su sustituto y a su Secretario; a los demás miembros de la Junta Directiva, y de la Comisión de Control y Fiscalización o al socio que se encargue de estas funciones;
- b) designar al Consejo Administrativo o al Administrador;
- c) aprobar el presupuesto de ingresos y gastos por actividades, los estados financieros, los fondos y su destino, la distribución de utilidades y la cuantía de los anticipos;
- d) modificar los estatutos;
- e) aprobar la admisión de nuevos socios;
- f) aplicar la medida disciplinaria de suspensión definitiva de la condición de socio;
- g) aprobar la baja de activos fijos o cualquier otro acto de disposición sobre los demás bienes propiedad de la cooperativa;
- h) conocer y resolver las reclamaciones de derechos de los socios y trabajadores;
- i) solicitar la disolución de la cooperativa; y
- j) conocer de otros asuntos que por su importancia así se determinen en los estatutos.

ARTÍCULO 38.- Además de las que puedan fijarse en los estatutos, el Presidente de la Asamblea General tiene las atribuciones y obligaciones siguientes:

- a) Ejercer la representación de la Cooperativa frente a los propios socios y a terceros;
- b) proponer a la Asamblea General la aprobación o la separación de los socios u otra medida;
- c) presidir y dirigir las deliberaciones de la Asamblea General y el órgano de administración;
- d) dirigir y controlar el funcionamiento de la Cooperativa;
- e) rendir cuentas del desempeño de sus funciones a la Asamblea General y al órgano de administración;
- f) convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General, así como cursar invitación a quienes resulte procedente;
- g) solicitar la apertura y cierre de las cuentas bancarias de la Cooperativa;
- h) dirigir la elaboración de los planes de producción o prestación de servicios;
- i) suscribir los contratos en que sea parte la Cooperativa; y
- j) controlar el cumplimiento por los demás miembros de la Cooperativa de sus respectivas funciones.

ARTÍCULO 39.- Además de las que puedan fijarse en los estatutos, el Secretario de la Asamblea General tiene las atribuciones y obligaciones siguientes:

- a) Preparar y tramitar las citaciones para las reuniones de la Asamblea General;
- b) garantizar la redacción del acta de todas las reuniones de la Asamblea General, así como su custodia y el control del cumplimiento de los acuerdos;

- c) llevar el control y registro de las actas, de los socios y demás documentación que se requiera; y
- d) certificar, cuando se requiera, los acuerdos de la Asamblea General.

SECCIÓN TERCERA

ARTÍCULO 40.- La Junta Directiva es el órgano colegiado de dirección de la Cooperativa, que se subordina a la Asamblea General y está integrada por un Presidente, un Secretario y los demás miembros que la Asamblea General determine, según lo que prevean los estatutos.

ARTÍCULO 41.- Además de los que puedan fijarse en los estatutos y los que como Presidente de la Asamblea General tiene, el Presidente de la Junta Directiva tiene las atribuciones y obligaciones principales siguientes:

- a) Disponer la citación de los miembros para las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva y, en su caso, la invitación a las personas que se requiera;
- b) presidir las sesiones de la Junta Directiva; y
- c) proponer o exigir que se adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones que emanen de auditorías u otras acciones de control externo que se realicen a la Cooperativa, y controlar su ejecución.

ARTÍCULO 42.- Además de las que puedan fijarse en los estatutos el Secretario de la Junta Directiva tiene las atribuciones y obligaciones principales siguientes:

- a) Preparar y tramitar las citaciones para las sesiones de la Junta Directiva;
 - b) garantizar la redacción del acta de todas las reuniones de la Junta Directiva, así como su custodia y el control del cumplimiento de los acuerdos;
 - c) llevar el control y registro de las actas y demás documentación que se requiera;
- y
- d) certificar, cuando corresponda, los acuerdos de la Junta Directiva.

SECCIÓN CUARTA

ARTÍCULO 43.1.- Es competencia del Consejo Administrativo o Administrador, la gestión administrativa de la Cooperativa y cualesquiera otras que le atribuyan los estatutos o los acuerdos de la Asamblea General y de la Junta Directiva cuando proceda. Tendrá como funciones específicas las siguientes:

- a) Elaborar los planes de producción o servicios, de ingresos y gastos de la Cooperativa y someterlos a la aprobación de la Asamblea General;
- b) informar periódicamente a la Asamblea General el estado de cumplimiento de los planes de producción de la Cooperativa;
- c) proponer a la Asamblea General la organización de las labores inherentes al objeto social de la Cooperativa, a cargo de los socios;
- d) advertir a la Asamblea General sobre las situaciones que perjudiquen el cumplimiento de los planes, así como la adquisición de insumos o la comercialización de los productos o servicios, u otras actividades que conforman el objeto social de la Cooperativa;
- e) informar a la Asamblea General los daños o pérdidas que ocurran, de bienes o derechos del patrimonio de la Cooperativa y sus causas, así como proponer las medidas dirigidas a obtener el resarcimiento correspondiente;

f) adoptar medidas organizativas encaminadas a favorecer el debido cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General;

g) contratar los trabajadores eventuales, según el marco regulatorio que se aprueben en los estatutos;

h) controlar el cumplimiento de los deberes generales y demás tareas que se atribuyan a cada socio, así como, en su caso, de las labores de los trabajadores eventuales de la Cooperativa e informar de su resultado a la Asamblea General, al Presidente o a la Junta Directiva cuando proceda;

i) rendir cuentas periódicamente a la Asamblea General sobre el resultado de su desempeño; y

j) cualquier otra que resulte necesaria y se recoja en los estatutos de la Cooperativa.

2. El Consejo Administrativo o Administrador se subordina al Presidente o a la Junta Directiva, cuando proceda.

ARTÍCULO 44.- El Consejo Administrativo para el cumplimiento de sus obligaciones puede elegir de entre sus miembros los cargos que estime necesarios, teniendo en cuenta lo previsto en los estatutos.

SECCIÓN QUINTA

ARTÍCULO 45.- La Comisión de Control y Fiscalización o el socio a cargo de estas actividades designado por la Asamblea General, conforme al artículo 19 del Decreto-Ley, tiene la función de supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la utilización de los recursos financieros y materiales de la Cooperativa y rinde cuenta periódicamente de su gestión a la Asamblea General. A ella no pueden pertenecer los miembros del resto de los órganos de dirección y administración.

CAPÍTULO V

SECCIÓN PRIMERA

ARTÍCULO 46.- El capital de trabajo inicial de la Cooperativa se aporta por los socios fundadores en pesos cubanos íntegramente en el acto de otorgamiento de la escritura fundacional o de forma aplazada, según se establezca en los estatutos, donde además se debe establecer el monto mínimo.

ARTÍCULO 47.- Los estatutos pueden fijar montos diferentes para las aportaciones que realicen los socios que se incorporen luego de constituida la Cooperativa.

ARTÍCULO 48.- Las aportaciones dinerarias al capital de trabajo inicial se justifican ante notario mediante la certificación de su depósito a favor de la Cooperativa en proceso de constitución, en un banco del sistema bancario nacional cubano.

ARTÍCULO 49.- El aporte de los nuevos socios al patrimonio cooperativo se incrementará en proporción razonable al incremento de las utilidades distribuibles o por decisión propia.

ARTÍCULO 50.- Los actos de disposición sobre bienes y derechos que integran el patrimonio de la Cooperativa requieren la aprobación de la Asamblea General.

ARTÍCULO 51.- Se exonera del pago del arrendamiento hasta un año y por una sola vez, a aquellas Cooperativas que asuman en el transcurso del primer año de su existencia la reparación de las instalaciones estatales arrendadas.

SECCIÓN SEGUNDA

ARTÍCULO 52.- La Cooperativa está obligada a llevar la contabilidad de sus operaciones a efectos fiscales, a partir de las Normas Cubanas de Información Financiera, con las especificidades que al respecto se establezcan.

ARTÍCULO 53.- El órgano de administración adoptará las medidas que se requieran para garantizar el cumplimiento de las normas contables que rijan para las Cooperativas.

SECCIÓN TERCERA

ARTÍCULO 54.- La Cooperativa elabora sus planes anuales de producción y servicios, de ingresos y gastos, así como cualquier otro a mayor o menor plazo que le resulte necesario para la mejor organización de las actividades que constituyen su objeto social, de acuerdo con el artículo 20 del Decreto-Ley.

ARTÍCULO 55.- Los planes internos de la Cooperativa se elaboran por el órgano de administración tomando en consideración, cuando corresponda, el pedido estatal y otros compromisos, y serán aprobados por la Asamblea General.

SECCIÓN CUARTA

ARTÍCULO 56.1.- En todas las Cooperativas, a partir de los ingresos totales obtenidos durante el ejercicio fiscal, se procede cuando corresponda al pago de la amortización del crédito para la adquisición del capital de trabajo inicial, el cumplimiento de las obligaciones adquiridas de otros créditos bancarios recibidos, los pagos de obligaciones con el presupuesto del Estado y los demás gastos ocasionados en el proceso productivo.

2. De las utilidades obtenidas al cierre del ejercicio fiscal se destinará para reservas obligatorias hasta el límite establecido en la legislación financiera vigente, por acuerdo de la Asamblea General y tomando en cuenta la situación económica y financiera.

3. De la utilidad neta obtenida después de pagar el respectivo impuesto, la Asamblea General determina la proporción a distribuir entre los socios y otros posibles destinos.

4. La distribución de utilidades a que se refiere el apartado anterior se efectuará siempre que no existan:

- a) Deudas vencidas con el presupuesto del Estado;
- b) créditos vencidos con instituciones bancarias; y
- c) otras obligaciones prioritarias que apruebe la Asamblea General.

ARTÍCULO 57.1.- Cuando la Cooperativa hubiese pagado íntegramente los bienes que le hayan sido vendidos por los socios y constituido más de la mitad de la reserva para cubrir contingencias, puede repartir más del 50 % de las utilidades, hasta llegar a un 70 % cuando haya completado dicha reserva.

2. La distribución del fondo constituido según el por ciento de utilidades a distribuir, será según la escala siguiente:

- a) Del 51 al 65 % al 60 %;

b) del 66 al 80 % al 65 %; y

c) más del 81 % al 70 %.

3. La diferencia con el 100 % de las utilidades que no se distribuyen a los socios, se destinan al fondo de operaciones, inversiones, actividades socio-culturales, incrementar el fondo de contingencia y otros, según se aprueben en los estatutos.

ARTÍCULO 58.- Los socios que se incorporen a la Cooperativa después del comienzo de un ejercicio fiscal tienen derecho a cobrar las utilidades que le correspondan de ese ejercicio, en igualdad de condiciones respecto al resto de los socios, proporcionalmente al período trabajado y a su aporte de trabajo individual.

ARTÍCULO 59.- Las Cooperativas que tengan pérdidas las solventarán, en primera instancia, por medio de la reserva para cubrir contingencias.

SECCIÓN QUINTA

ARTÍCULO 60.- Los anticipos de las utilidades a los socios serán en efectivo, bienes o servicios y estarán exclusivamente en proporción a la cantidad, complejidad y calidad del trabajo de cada uno en la Cooperativa.

ARTÍCULO 61.- El procedimiento de cálculo de la cantidad, complejidad y calidad del trabajo de cada socio, con vistas a su retribución, incluidos los que desempeñen funciones administrativas, de servicios internos u otras de carácter indirecto, se establece en los estatutos.

ARTÍCULO 62.- La Asamblea General aprueba el monto de los anticipos a los socios, a propuesta del órgano de administración y teniendo en cuenta los resultados previstos para cada ejercicio fiscal.

SECCIÓN SEXTA

ARTÍCULO 63. - Para el cálculo de la jornada-socio a que se refiere el apartado 2 del artículo 26 del Decreto-Ley, se partirá de la cantidad de socios de la Cooperativa y se multiplicará por la jornada-socio anual.

ARTÍCULO 64.- El salario de los trabajadores contratados se pactará entre el órgano de administración de la Cooperativa y el trabajador, a partir del salario mínimo establecido en el país y según la cantidad y calidad del trabajo realizado.

ARTÍCULO 65.- El órgano de administración de la Cooperativa pactará los montos a pagar a los trabajadores por cuenta propia por los servicios que se requieran.

SECCIÓN SÉPTIMA

ARTÍCULO 66.1.- Las Cooperativas disfrutarán de iguales condiciones con respecto al resto de las formas productivas y de servicios del país en la producción, la comercialización y los servicios que puedan desarrollar según los fines para lo que fue constituida.

2. En la condición de titulares o propietarios de sus producciones y servicios, las Cooperativas pueden realizar ventas directas sin intermediarios, después de cumplir sus compromisos con el Estado, en los casos que corresponda.

CAPÍTULO VI

SECCIÓN PRIMERA

ARTÍCULO 67.- Además de las que se señalen en los estatutos, constituyen infracciones de la disciplina de los socios de las Cooperativas, las siguientes:

- a) El incumplimiento de los acuerdos de los órganos internos o de los estatutos;
- b) sustraer, desviar, causar daño o la pérdida de bienes en propiedad o posesión de la Cooperativa;
- c) cometer hechos o incurrir en conductas que puedan ser constitutivos de delitos contra la Cooperativa o en ocasión de desempeño de su trabajo; y
- d) incurrir en otras conductas que afecten a la Cooperativa.

ARTÍCULO 68.- En los estatutos de cada Cooperativa se establecen las medidas disciplinarias a aplicar de acuerdo con la gravedad del hecho y la conducta personal mantenida por el socio, las que pueden consistir en amonestaciones, multas, o la suspensión definitiva de la condición de socio; asimismo, se regula el procedimiento para su aplicación, cumplimiento y mecanismo de impugnación.

SECCIÓN SEGUNDA

ARTÍCULO 69.1.- Constituyen infracciones de la disciplina laboral de los trabajadores de las Cooperativas, las establecidas en la legislación laboral común.

2. Las infracciones cometidas por los trabajadores asalariados de la Cooperativa se sancionan por el Administrador.

3. Contra las medidas impuestas por el Administrador, los trabajadores asalariados pueden establecer recurso de Apelación ante la Asamblea General en un término de diez (10) días y esta resolverá en un plazo no mayor de treinta (30) días.

4. Los trabajadores inconformes con lo resuelto por la Asamblea General pueden recurrir al Tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la legislación laboral vigente.

CAPÍTULO VII

ARTÍCULO 70.- Los conflictos que surjan entre los socios de la Cooperativa y entre aquellos y la Cooperativa, pueden presentarse directamente entre ellos o por medio del órgano de administración; en ambos casos dichos reclamos se notifican de manera escrita, dejando constancia del momento de su realización.

ARTÍCULO 71.- Cuando el reclamo se presente por medio del órgano de administración, este queda obligado a notificarla al socio o socios destinatarios y el reclamante puede solicitar además la mediación de dicho órgano para hallar una solución a su reclamo.

ARTÍCULO 72.- A los efectos del cómputo del término previsto en el artículo 28 del Decreto-Ley, el momento de la notificación de la reclamación, ya sea a través del órgano de administración o directamente, se entiende como el inicio de la negociación amigable entre las partes.

ARTÍCULO 73.1.- El órgano de dirección o administración al que se halla sometido el conocimiento de algún conflicto, en virtud del artículo 28 del Decreto-Ley, contará con el término de treinta (30) días naturales para emitir su decisión al respecto.

2. Contra lo resuelto por el órgano de dirección o administración el reclamante podrá acudir a la vía judicial, según la naturaleza del conflicto y conforme a lo legalmente establecido.

ARTÍCULO 74.- Los conflictos entre los trabajadores asalariados y la Cooperativa, que tengan por objeto presuntos incumplimientos por parte de esta, de las obligaciones que le resultan del respectivo contrato de trabajo o del régimen general de la seguridad social, se conocerán y resolverán por el órgano de administración, y lo resuelto por este podrá impugnarse ante la jurisdicción judicial laboral.

CAPÍTULO VIII

ARTÍCULO 75.- Los órganos, organismos y entidades nacionales que autorizan la constitución de la Cooperativa, deciden sobre su disolución y liquidación. En caso que esta solicite la fusión, extinción, escisión o modificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Decreto-Ley, lo resolverán en el término de treinta (30) días, a partir de recibida la solicitud.

ARTÍCULO 76.- El proceso de liquidación del patrimonio de la Cooperativa se realiza por la comisión liquidadora que se designe por la Asamblea General o, en su caso, por mandato judicial.

ARTÍCULO 77.- Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinan, en primer lugar, a satisfacer las obligaciones contraídas por la Cooperativa que estuvieran pendientes, y el resto tendrá el destino previsto en los estatutos, salvo disposición legal en contrario.

PRIMERA: En las Cooperativas que se constituyan en la modalidad que autoriza el artículo 6, inciso b), del Decreto-Ley, los socios que sean trabajadores por cuenta propia mantendrán debidamente actualizada su respectiva licencia y cumplirán las obligaciones tributarias que como tales les correspondan.

SEGUNDA: Los trabajadores menores de 18 años con contratos indeterminados cuya entidad pase a ser gestionada como Cooperativa de las previstas en el artículo 6, inciso c), del Decreto-Ley y manifiesten su interés en ser socios de esta, se les contratará hasta arribar a dicha edad, momento en que procederá su ingreso como socio fundador.

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba

DADO en el Palacio de la Revolución, en la ciudad de La Habana, a los 28 días del mes de noviembre de 2012.

Presidente del Consejo de Ministros

• RESOLUCION 570/12

MINISTERIOS

POR CUANTO: El Decreto-Ley No. 147 “De la Reorganización de los Organismos de la Administración Central del Estado” de 21 de abril de 1994, en su artículo 18, dispone que el Ministerio de Economía y Planificación es uno de dichos Organismos.

POR CUANTO: El Decreto-Ley No. 305 de 15 de noviembre de 2012 en su Disposición Final Cuarta estableció que le corresponde al Ministro de Economía y

Planificación, dictar la norma legal que regule el procedimiento de licitación para la creación experimental de cooperativas no agropecuarias.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas, en el Apartado Tercero, numeral 4 del Acuerdo No. 2817, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, de fecha 25 de noviembre de 1994,

ÚNICO: Aprobar y poner en vigor el siguiente procedimiento de licitación:

ARTÍCULO 1.- La presente resolución es solo de aplicación en los casos en que se liciten los bienes de un establecimiento estatal para su gestión por las cooperativas no agropecuarias.

La licitación incluye el arrendamiento o cualquier otro derecho que conceda solo el uso y disfrute de inmuebles; o la venta, arrendamiento o similar de bienes muebles.

ARTÍCULO 2.- Las licitaciones a que se refiere el artículo anterior, serán como regla, abiertas, es decir que se invitará a presentar ofertas a un número indeterminado de posibles oferentes.

ARTÍCULO 3.- Los organismos de la Administración Central del Estado, los consejos de la Administración Provincial (incluido el CAM de la Isla de la Juventud) y las entidades nacionales a los que se subordinen las entidades que intervengan en procedimientos de licitación, autorizan, de conformidad con lo establecido, a ejecutar el proceso de licitación, y controlan que las licitaciones que se convoquen se ajusten a lo previsto en la presente.

ARTÍCULO 4.- Estos organismos u órganos vienen obligados a establecer de conformidad con lo que se dispone en la presente, las reglas y condiciones específicas para las licitaciones a desarrollar por las entidades estatales (empresa estatal o unidad presupuestada) de su subordinación, las que serán razonables y susceptibles de verificación.

ARTÍCULO 5.- La entidad que licita será la empresa estatal o unidad presupuestada cuyos bienes serán objeto de licitación.

ARTÍCULO 6.- Para la realización de estas licitaciones, cada entidad constituirá una comisión integrada por un número impar de miembros, en la que estarán representadas las áreas técnicas, económico-financieras y jurídicas.

La comisión será la encargada de ejecutar el proceso de licitación y de tomar la decisión final en cuanto a la adjudicación.

ARTÍCULO 7.- En toda licitación se observarán los siguientes principios:

a) Transparencia: entendida como el conocimiento que de todas las acciones y decisiones de la licitación tengan los participantes para un efectivo control social;

b) Igualdad: que todos los participantes tengan iguales oportunidades y derechos;

c) Publicidad: que sean públicas las distintas acciones y decisiones del procedimiento de licitación.

ARTÍCULO 8.- En cada licitación se realizará una convocatoria en la cual se anuncie el interés de la entidad de licitar los bienes. Asimismo se conformará un pliego de licitación.

ARTÍCULO 9.- Tanto la convocatoria como el pliego de licitación se informarán públicamente por cualesquiera de los medios públicos de comunicación. Las entidades decidirán el medio a emplear para hacer pública esta información.

ARTÍCULO 10.- El pliego de licitación debe contener como mínimo la información siguiente:

- a) El objeto de la licitación;
- b) la identificación del licitante;
- c) el plazo de duración de la licitación;;
- d) las condiciones específicas de la licitación que debe incluir los derechos y obligaciones esenciales que se asumirán por ambas partes;
- e) lugar y fecha de entrega de las ofertas; y;
- f) el lugar, fecha y hora en la que se realizará la apertura de los sobres sellados contentivos de las ofertas..

ARTÍCULO 11.- Las condiciones de la licitación no pueden variarse durante el proceso.

ARTÍCULO 12.- Los distintos interesados, entregarán sus ofertas en sobres sellados, y la apertura de estos se realizará ante notario público, dejando constancia del acto en documento público.

ARTÍCULO 13.- El examen, evaluación y decisión de la licitación se ajustará a las reglas y condiciones previstas y la decisión de adjudicación se razonará.

ARTÍCULO 14.- Para la adjudicación de la licitación, la comisión selecciona de entre las ofertas presentadas, aquella que asegure las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, condiciones técnicas, entre otros aspectos.

ARTÍCULO 15.- La comisión de licitación confecciona un informe público en el que deben constar como mínimo:

- a) los nombres de los miembros de la comisión;
- b) el objeto de la licitación;
- c) la identificación de los diferentes oferentes;
- d) las razones técnicas, económicas, financieras, jurídicas entre otras, que motivaron la selección;
- e) lugar, fecha y hora del informe;
- f) la firma de los miembros de la comisión, y;
- g) el voto particular de algún miembro si lo hubiere.

ARTÍCULO 16.- El informe se dará a conocer a todos los oferentes en el mismo momento, a los que se citará oportunamente.

ARTÍCULO 17.- Los participantes en la licitación, pueden en el término improrrogable de tres días hábiles a partir de la notificación del informe, presentar ante la comisión una aclaración del informe, cuyo alcance solo será en aras de ganar claridad en algunos de los particulares del informe. La comisión tiene un término de cinco días hábiles para dar respuesta aclaratoria.

ARTÍCULO 18.- Cualquiera de los oferentes cuya oferta no fue seleccionada, puede en el término de cinco días hábiles desde la notificación del informe, presentar recurso de

reforma ante la propia comisión, impugnando la decisión. La Comisión deberá responder en un término no mayor de 10 días hábiles.

Si el recurso de reforma, se declarase con lugar, generando una decisión diferente a la inicial, la Comisión citará nuevamente a todos los participantes para en un único acto dar a conocer la nueva decisión.

ARTÍCULO 19.- La decisión definitiva de la Comisión que resuelve el recurso de reforma, es impugnable ante la vía judicial por los interesados, tal y como se prevé en el Decreto-Ley No. 305 “De las cooperativas no agropecuarias”.

ARTÍCULO 20.- Se confeccionará un expediente contentivo de toda la información de la licitación, el que deberá conservarse durante cinco años y que será auditable. El expediente contendrá como mínimo los siguientes documentos: la autorización de licitación, el medio o modo empleado para hacer público el pliego, el pliego de licitación, las ofertas entregadas, el documento que acredita el acto de apertura de los sobres, y el informe de la comisión.

ARTÍCULO 21.- Una vez concluida la licitación y seleccionado el oferente, se instrumentarán las relaciones entre ambas partes, mediante los contratos que correspondan de conformidad con la legislación vigente.

ARTÍCULO 22.- Los organismos, órganos o entidades nacionales que autorizan la licitación podrán excepcionalmente decidir que esta sea restringida, entendiendo por tal, aquella en la que se invita a un número reducido de oferentes a participar. En este caso se observará todo lo dispuesto en la presente resolución, a excepción de lo relativo a la publicidad.

PRIMERA: La presente resolución es también de aplicación a las sociedades mercantiles de capital totalmente cubano, cuando se liciten bienes de estas.

SEGUNDA: Las entidades que liciten sus bienes, no necesitarán modificar su objeto social para ello; será suficiente con la autorización de gestión por las cooperativas no agropecuarias, para entender incorporada a su objeto tal actividad.

TERCERA: En los casos en que no exista licitación, pero sí se autorice el arrendamiento de inmuebles o venta o arrendamiento de bienes muebles estatales, para la gestión por las cooperativas no agropecuarias, no será necesario modificar el objeto social, siendo suficiente con la autorización de la aplicación de la experiencia.

CUARTA: Con el propósito de coadyuvar a una gestión eficiente de las cooperativas no agropecuarias, las entidades estatales licitantes pueden brindar servicios de contabilidad u otro similar, sin necesidad de modificar su objeto social.

ARCHÍVESE el original debidamente firmado en la Dirección Jurídica de este Ministerio. Publíquese en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

DADA,, en La Habana,, a 15 de noviembre de 2012.

Ministro de Economía y Planificación

- **DECRETO 427/12**

POR CUANTO: La Ley No. 113 “Del Sistema Tributario”, de fecha 23 de julio de 2012, establece entre otros, los impuestos sobre Utilidades, sobre las Ventas, sobre los Servicios y por la Utilización de la Fuerza de Trabajo, así como la Contribución a la Seguridad Social y en su Disposición Final Segunda, incisos a) y f) faculta al Ministro de Finanzas y Precios, para conceder exenciones y bonificaciones, totales, parciales, permanentes o temporales y las formas y procedimientos para el cálculo, pago y liquidación de los impuestos.

POR CUANTO: Mediante el Acuerdo No. 3944, de fecha 19 de marzo de 2001, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, fueron aprobados con carácter provisional, hasta tanto sea adoptada la nueva legislación sobre la organización de la Administración Central del Estado, el objetivo y las funciones y atribuciones específicas de este Ministerio, regulándose entre otras la función específica de dirigir y controlar la labor de formación, fijación y modificación de los precios y tarifas, así como organizar la valuación y control del Patrimonio Estatal, y elaborar los procedimientos de contabilidad, dictando cuantas regulaciones sean necesarias al efecto.

POR CUANTO: Conforme a lo dispuesto en el Decreto-Ley No. 305 “De las Cooperativas no Agropecuarias”, de fecha 15 de noviembre de 2012 y el Decreto No. 309 “Reglamento de las Cooperativas no Agropecuarias de Primer Grado”, de fecha 28 de noviembre de 2012, se hace necesario establecer el tratamiento de precios y de patrimonio estatal, así como las normas específicas de contabilidad que les serán aplicables a las cooperativas no agropecuarias; además se regula la constitución de un fondo para financiar el capital de trabajo inicial de estas cooperativas y otros bienes que se determinen venderles a estas formas de gestión, en los casos que no resulten sujetos de créditos bancarios.

POR CUANTO: Mediante el Decreto-Ley No. 306, “Del Régimen Especial de Seguridad Social de los Socios de las Cooperativas no Agropecuarias”, de fecha 17 de noviembre de 2012, se establece el Régimen Especial de Seguridad Social para los socios de estas cooperativas.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas, en el Apartado Tercero, numeral Cuarto del Acuerdo No. 2817, de fecha 25 de noviembre de 1994, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros,

PRIMERO: Las cooperativas no agropecuarias están sujetas, conforme a la Ley No. 113 “Del Sistema Tributario”, al pago de los tributos que les corresponda; y en específico por el ejercicio de la actividad económica, se obligan a pagar los impuestos sobre Utilidades, sobre las Ventas, sobre los Servicios y por la Utilización de la Fuerza de Trabajo, con las adecuaciones previstas en los siguientes apartados.

SEGUNDO: El pago de los impuestos sobre las Ventas, y sobre los Servicios cuando corresponda, se efectúa sobre la base de los ingresos generados, aplicando el tipo impositivo establecido a los efectos en la Ley del Presupuesto del Estado para el año 2013.

Exonerar a las cooperativas no agropecuarias del Impuesto sobre Ventas por la comercialización a la población de productos agropecuarios.

TERCERO: Los impuestos a que se refiere el apartado anterior se pagan mensualmente dentro de los veinte (20) días naturales siguientes al cierre del mes en que se efectuaron las ventas, por el párrafo 011452 “Impuestos sobre las Ventas o Servicios-

Cooperativa no agropecuaria”, que se adicionan al vigente Clasificador de Recursos Financieros del Presupuesto del Estado.

CUARTO: Las cooperativas no agropecuarias que con el propósito de realizar sus actividades contraten fuerza de trabajo, quedan obligadas al pago del Impuesto por la Utilización de la Fuerza de Trabajo, aplicando como tipo impositivo el vigente para el año fiscal, a la totalidad de las remuneraciones pagadas a los trabajadores contratados, así como aplicar lo dispuesto en los artículos 235 al 237, de la Ley No. 113 “Del Sistema Tributario”.

QUINTO: Las cooperativas no agropecuarias pagarán la Contribución a la Seguridad Social de conformidad con el Régimen Especial de Seguridad Social establecido en el Decreto-Ley No. 306, para los socios de las cooperativas no agropecuarias.

SEXTO: El Impuesto por la Utilización de la Fuerza de Trabajo y la Contribución a la Seguridad Social de sus socios, se pagan trimestralmente, dentro de los primeros veinte (20) días naturales del mes siguiente al trimestre vencido, por los párrafos que se relacionan a continuación del vigente Clasificador de Recursos Financieros del Presupuesto del Estado:

- a) Párrafo 061012 “Impuesto por la Utilización de la Fuerza de Trabajo;
- b) Párrafo 082013 “Contribución Especial de los Trabajadores a la Seguridad Social”.

SÉPTIMO: Para el cálculo del Impuesto sobre Utilidades, las cooperativas no agropecuarias, al total de los ingresos obtenidos en el año fiscal, además de los conceptos que se descuentan conforme a lo establecido en el artículo 108 de la nueva Ley No. 113 “Del Sistema Tributario” se deducirán los siguientes conceptos:

- a) el arrendamiento de los bienes muebles e inmuebles a entidades debidamente autorizadas para ello, que les sean exoneradas o bonificadas, cuando asuman reparaciones en los locales estatales que arrienden, las que deben ser justificadas documentalmente;
 - b) una retribución por socio, consistente en el salario medio de la provincia, o en su caso, en el municipio especial Isla de la Juventud, donde esté establecida u opere la cooperativa, y
 - c) los montos destinados a la creación de las reservas para cubrir contingencias.
- Los gastos asociados a la actividad serán contabilizados en su totalidad y no se exigirá justificación del cuarenta por ciento (40 %) de estos.

OCTAVO: A los efectos del pago del Impuesto sobre Utilidades, las cooperativas no agropecuarias están obligadas a presentar anualmente una Declaración Jurada, dentro del trimestre siguiente a la conclusión del año fiscal, por el párrafo 040052 “Impuesto sobre Utilidades-Cooperativa no agropecuaria”, que se adiciona al vigente Clasificador de Recursos Financieros del Presupuesto del Estado.

NOVENO: En los casos en que las cooperativas no agropecuarias arrienden locales para el desarrollo de su actividad, cuando se asuman reparaciones del local y los órganos y organismos o entidades nacionales, según corresponda, exoneren a las cooperativas del pago de las tarifas de arrendamiento, la entidad arrendadora que corresponda, deberá emitir Certificación del importe exonerado. Cuando se abone la

tarifa, el justificante lo constituye el comprobante de pago emitido por la mencionada entidad.

DÉCIMO: Las cooperativas no agropecuarias están obligadas a acudir a la Oficina Nacional de Administración Tributaria de su domicilio fiscal para tramitar su inscripción en el Registro de Contribuyentes, en el plazo de quince (15) días naturales contados a partir de la fecha de notificación de inscripción en el Registro Mercantil.

UNDÉCIMO: Se eximen del pago de las obligaciones tributarias por concepto de impuestos sobre Utilidades, sobre las Ventas, sobre los Servicios y por la Utilización de la Fuerza de Trabajo, correspondientes a los primeros tres (3) meses de operaciones, a las cooperativas no agropecuarias que se inicien en el ejercicio de la actividad.

DUODÉCIMO: Los precios y tarifas de los productos y servicios que comercialicen las cooperativas no agropecuarias se determinan por estas, según la oferta y demanda. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, aquellos precios y tarifas que se establecen con carácter obligatorio para todas las entidades, los cuales serán aprobados de acuerdo a lo regulado por este Ministerio, de conformidad con las características de los productos y servicios que se comercialicen por la cooperativa.

DECIMOTERCERO: Establecer, como norma general, para la formación de los precios en pesos cubanos (CUP) y en pesos convertibles (CUC), de los productos que se vendan por las entidades autorizadas a las cooperativas como materias primas, e insumos para el desarrollo de su actividad, las reglas que se describen a continuación:

a) Para los productos que se les suministren y a la vez se oferten en el mercado minorista, se aplicará el precio minorista menos un descuento del veinte por ciento (20 %).

b) Para los productos que solo se vendan en el mercado mayorista, se aplicará el precio mayorista más un recargo que lo aproxime al precio minorista menos un descuento del veinte por ciento (20 %), según lo establecido en el acápite a).

DECIMOCUARTO: Las diferencias de precios que se generen por las ventas a estas formas de gestión, entre los precios mayoristas vigentes y los que se formen, se aportarán al Presupuesto del Estado por los proveedores.

DECIMOQUINTO: El precio para la venta a las cooperativas no agropecuarias de activos fijos tangibles pertenecientes a entidades estatales, con excepción de inmuebles, se determina por acuerdo entre las partes a partir de su valor residual o, mediante avalúo realizado por entidades especializadas autorizadas y se ejecutará suscribiendo al efecto el correspondiente Contrato a tenor de lo autorizado legalmente.

Para los activos fijos tangibles tecnológicos y de importancia significativa, el precio se fijará mediante avalúo.

Para los activos fijos tangibles objetos de licitación, se tomará como valor referencial mínimo el determinado en el avalúo del bien.

DECIMOSEXTO: El precio para la venta a las cooperativas no agropecuarias de útiles y herramientas en uso pertenecientes a entidades estatales, se determinará por acuerdo entre las partes.

DECIMOSÉPTIMO: Los ingresos recibidos por las entidades estatales como resultado de estas ventas, se aportarán al Presupuesto del Estado.

DECIMOCTAVO: Para los servicios de electricidad, agua, gas, telefonía, entre otros, se establecerán contratos con las instituciones responsables de prestar estos servicios, en los que se acordarán las condiciones de prestación de los mismos y sus tarifas. Los procedimientos para la formación de estas tarifas, se establecerán por el Ministerio de Finanzas y Precios.

DECIMONOVENO: El Órgano, Organismo o entidad nacional responsable con la creación de la cooperativa emite la norma jurídica en particular y define lo que corresponda en materia de precios para los productos específicos, medios, útiles y herramientas que se venderán o arrendarán a cada cooperativa, previa consulta con el Ministerio de Finanzas y Precios.

VIGÉSIMO: Facultar a los órganos y organismos o entidades nacionales a aprobar las tarifas por metros cuadrados (m²), para el arrendamiento de inmuebles pertenecientes a entidades, a las cooperativas no agropecuarias, tomando en consideración la ubicación, según sea en zona urbana, rural u otro tipo de clasificación, sus características y dimensiones, sobre la base de que cubran los gastos en que se incurra en el ejercicio de la actividad, incluyendo los gastos por depreciación.

VIGÉSIMO PRIMERO: Aprobar la “Norma Específica de Contabilidad para las cooperativas no agropecuarias No. 7, Presentación de Estados Financieros”, que como Anexo Único forma parte integrante de la presente Resolución y consta de nueve (9) páginas, la que se ubicará en el Manual de Normas Cubanas de Información Financiera, en la Sección II: “Normas Cubanas de Contabilidad”, Capítulo 2.2: “Normas Específicas de Contabilidad”.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Las cooperativas no agropecuarias utilizarán como referencia el Nomenclador de Cuentas Nacional aprobado para la actividad empresarial del país en las Normas Cubanas de Información Financiera, el que se adecuará a las características de la actividad de cada cooperativa por los organismos rectores ramales y se aprobará por la Dirección de Política Contable de este Ministerio, antes del inicio de operaciones.

VIGÉSIMO TERCERO: Los Sistemas Contables-Financieros soportados sobre tecnologías de la información que se utilicen para el procesamiento de la contabilidad, deben cumplir el requisito de estar certificados.

VIGÉSIMO CUARTO: Este Ministerio constituirá, con recursos del Presupuesto del Estado, un fondo en fideicomiso público, en lo adelante Fondo, para financiar el capital de trabajo inicial y otros bienes que se determine vender a las cooperativas no agropecuarias, en los casos en que estas no resulten sujeto de crédito bancario total o parcial, el que será administrado por los bancos autorizados por el Banco Central de Cuba para actuar como agente fiduciario, y tendrá como objetivo potenciar el inicio de las operaciones de dichas cooperativas.

VIGÉSIMO QUINTO: Este Ministerio firmará un contrato de fideicomiso para la administración del Fondo, con cada Banco que corresponda, a fin de establecer los términos y condiciones para su operatoria, así como para los préstamos que se otorguen a partir de este Fondo.

VIGÉSIMO SEXTO: Los bancos transferirán al Presupuesto del Estado los recursos provenientes de los importes del principal e intereses pagados por las cooperativas, previo descuento de las cuantías que retengan a su favor, por los servicios de administración y gestión del Fondo, las que serán acordadas con este Ministerio.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Este Ministerio propone anualmente el monto de los recursos financieros con destino al Fondo, que se aprobará por la Ley del Presupuesto del Estado, para cada año.

Para su asignación, se tomarán en cuenta las necesidades presentadas por los organismos de la Administración Central del Estado y los consejos de administración provinciales, o en su caso en el municipio especial Isla de la Juventud, responsables directos de la implantación, control y evaluación de las experiencias de cooperativas no agropecuarias, correspondientes a su competencia.

VIGÉSIMO OCTAVO: Los plazos y los importes para la amortización de los préstamos por las cooperativas no agropecuarias, se establecerán de forma que les permitan cumplir las restantes obligaciones con el Presupuesto del Estado y cubrir sus operaciones corrientes.

VIGÉSIMO NOVENO: Las cooperativas no agropecuarias quedan obligadas a constituir y mantener una Reserva para Pérdidas y Contingencias, la que estará conformada como mínimo con el dos por ciento (2 %) y hasta el diez por ciento (10 %) de los gastos totales anuales de la cooperativa.

Esta Reserva para Pérdidas y Contingencias se nutrirá anualmente con el diez por ciento (10 %) de las utilidades reales obtenidas al cierre de cada ejercicio económico.

TRIGÉSIMO: Las cooperativas no agropecuarias, utilizarán los recursos en ella acumulados para resarcir las pérdidas que se originen en sus resultados económico-financieros al cierre de un ejercicio económico.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Cuando al cierre de cada ejercicio económico, las cooperativas no agropecuarias, comprueben que los recursos acumulados en dicha reserva superan los límites establecidos en el Apartado Vigésimo Noveno de esta Resolución, proceden a disminuir esta reserva en la magnitud del exceso y consideran la disminución como ingreso del período fiscal en cuestión.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Al disolverse y liquidarse las cooperativas no agropecuarias, las Reservas para Pérdidas y Contingencias constituidas, después de deducido el pago del correspondiente Impuesto sobre Utilidades y cumplidas cualesquiera otras obligaciones legalmente contraídas, serán distribuidas entre los socios.

TRIGÉSIMO TERCERO: Lo dispuesto en la presente será aplicable hasta tanto se mantenga vigente lo legalmente establecido respecto a las cooperativas no agropecuarias, y en su caso, se ajustará en la medida en que se produzcan modificaciones en esta experiencia.

TRIGÉSIMO CUARTO: Lo dispuesto en los apartados Primero al Décimo Primero de la presente Resolución, se aplican a partir del 1ro. de enero de 2013.

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica de este Ministerio.

Dada en La Habana, a los 4 días del mes de diciembre de 2012.

Ministra de Finanzas y Precios

ANEXO ÚNICO

ÍNDICE Párrafos

OBJETIVO 1

ALCANCE 2

DEFINICIONES 3

ORGANIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD 4 - 6

GESTIÓN FINANCIERA Y DE CONTROL 7 - 10

OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 11

CALIDAD 12

RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 13

CRITERIOS BÁSICOS PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS 14 - 34

1. El objetivo de esta Norma es establecer las regulaciones para la Contabilidad y los estados financieros de las Cooperativas no agropecuarias, que deben aplicar un sistema de contabilidad utilizando la base contable del devengado.

2. Esta norma es de aplicación a las cooperativas no agropecuarias obligadas a llevar contabilidad, según lo establecido en la legislación vigente.

3. Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a continuación se especifica:

. Un activo es un recurso controlado por la cooperativa como resultado de acontecimientos pasados y del que se espera que se obtengan en el futuro beneficios económicos.

. Un pasivo es una obligación actual de la cooperativa derivada de acontecimientos pasados, cuya liquidación se espera que dé lugar a una transferencia de beneficios económicos del negocio.

. El patrimonio es el valor residual del activo de la cooperativa una vez deducido todo su pasivo.

Los incluyen los obtenidos por las entregas a clientes de productos terminados, trabajos efectuados, servicios prestados y mercancías con independencia de que se produzca o no la corriente monetaria en ese momento.

Los son el resultado de insumo de inventarios, el pago de servicios u otros gastos asociados directamente a la actividad. Incluye la Depreciación de los Activos Fijos Tangibles.

4 . La Contabilidad de las cooperativas no agropecuarias se organiza teniendo en cuenta las particularidades organizativas de cada una y utilizan el costo histórico como base de medición.

5. Utilizan el Peso Cubano (CUP) como moneda contable para la anotación en los registros y en la elaboración de los estados financieros.

6. En el caso de operaciones que se realicen en Pesos Convertibles (CUC) o monedas extranjeras, se utiliza la tasa de cambio de compra para la población para su anotación en los registros.

7 . Los registros a utilizar como fuente de los es-tados financieros son el Mayor, el Registro de Comprobantes de Operaciones y el Registro Control de Ingresos y Gastos.

8. Las operaciones se pueden reconocer por documentos justificantes o por declaración jurada de los integrantes de la cooperativa. La fuente de anotación de los Ingresos lo constituyen los registros de control de Ingresos y Gastos.

9. Cuando las actividades de la cooperativa lo aconsejen, podrán llevar registros auxiliares.

10. Las cooperativas podrán llevar los registros contables de forma manual o utilizando aplicaciones informáticas, por sí mismos o por otras personas a quienes autoricen para ello. Puede recibir servicios para este fin de cooperativas o entidades estatales que presten servicios profesionales.

1 1. El objetivo de los estados financieros de las cooperativas no agropecuarias es proporcionar información sobre la situación y el desempeño financiero, que sirva a los usuarios finales para evaluar la gestión de las actividades que desarrolla.

1 2. La calidad de la información suministrada en los estados financieros es el atributo que la hace útil a los usuarios. Sus cuatro componentes principales son los siguientes:

- a) Es fundamental que los usuarios puedan comprender fácilmente la información contenida en los estados financieros;
- b) Para ser útil, la información debe responder a las necesidades de adopción de decisiones de los usuarios;
- c) Se considera información fiable la que no contiene errores ni sesgos y sobre la cual los usuarios pueden confiar en que representa fielmente lo que pretende representar;
- d) Los usuarios deben poder comparar los estados financieros de una actividad a lo largo del tiempo para identificar tendencias en su situación y resultados financieros.

1 3. Al momento de aplicar la presente Norma, se reconocerán en moneda contable, inicialmente, los siguientes casos:

a) Efectivo en Caja: Saldo del efectivo que posea la cooperativa no agropecuaria en el momento en que se habilitan los registros contables.

b) Efectivo en Banco: Saldo del efectivo en Banco por tipo de moneda que posea la cooperativa no agropecuaria.

c) Activos Fijos Tangibles: Incluye el valor de muebles, equipos y otros activos que la cooperativa no agropecuaria considere como tal, vinculados con la actividad que realiza y que posea como fondo común, en el momento en que se habilitan los registros contables.

d) En el comprobante de operación que fije esta partida se relacionarán los siguientes datos:

- i. Descripción
- ii. Cantidad
- iii. Año de adquisición
- iv. Valor Inicial

e) Se utilizará como contrapartida de este reconocimiento inicial la cuenta de Patrimonio o de Pasivo que corresponda.

f) El monto pendiente de pago por los impuestos tasas y contribuciones correspondientes al mes de diciembre.

g) Cuando se reciben activos en arrendamiento, su control será físico y la cooperativa registrará el monto del gasto por arrendamiento en el momento del pago.

1 4. Los estados financieros básicos deben contener como mínimo los siguientes componentes:

- a) Un Balance General o Estado de Situación.

- b) Un Estado de Rendimiento Financiero.
- 15. Deben destacarse los siguientes datos:
 - a) El nombre de la cooperativa no agropecuaria que presenta la información.
 - b) Número de Identificación Tributario. (NIT)
 - c) La fecha de cierre del balance y el ejercicio a que se refiere el Estado de Rendimiento Financiero; y
 - d) La moneda en que se presenta la información. (Pesos Cubanos, CUP)
- 16. Los estados financieros intermedios se elaboran en los cinco primeros días hábiles posteriores al cierre del mes calendario.
- 17. Los estados financieros del cierre del ejercicio se elaboran en los diez (10) días posteriores al cierre del año calendario con las operaciones hasta el mes de diciembre y antes de registrar las operaciones de cierre de año. Al registrar las operaciones de cierre de año se elaborará un balance de comprobación de saldos de apertura para que sirva como base de los estados financieros del siguiente ejercicio contable.
- 18. En los estados financieros de estas entidades se debe precisar el activo circulante, activo fijo, pasivo corriente y a largo plazo, como categorías separadas del balance.
- 19. La clasificación de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos se ajustará a lo establecido en el Marco Conceptual vigente.
- 20. Los muebles, equipos y otros activos que la cooperativa no agropecuaria considere como tangibles, deben ser valorados inicialmente a su costo. El costo de los Activos Fijos Tangibles comprende su precio de adquisición, y todo costo directamente atribuible al acondicionamiento del activo para el uso previsto. Para calcular el precio de adquisición se deducen todos los descuentos y rebajas comerciales.
- 21. La depreciación de muebles y equipos debe consignarse sistemáticamente a lo largo de su vida útil. El método más simple es la depreciación lineal, se calcula antes del cierre del ejercicio contable y la tasa a utilizar es de un diez (10 %) por ciento anual.
- 22. En el comprobante de operaciones que registre el monto de la depreciación anual, deberá contener la base de cálculo.
- 23. Como mínimo, en el balance deben incluirse los renglones siguientes:
 - a) ACTIVO
 - a. Activo Circulante
 - i. Efectivo en Caja
 - ii. Efectivo en Banco
 - b. Activo Fijo Tangible Neto (Activo Fijo Tangible menos Depreciación Acumulada)
 - i. Muebles y Equipos
 - ii. Menos: Depreciación Acumulada
 - c. Total de Activo
 - b) PASIVO
 - a. Pasivo Circulante
 - i. Impuestos, Tasas y Contribuciones por Pagar
 - ii. Obligaciones Bancarias a Corto Plazo
 - b. Pasivos a Largo Plazo
 - i. Obligaciones Bancarias a Largo Plazo
 - c. Total de Pasivo
 - c) PATRIMONIO NETO
 - a. Saldo del Patrimonio de la cooperativa no agropecuaria al inicio del ejercicio.
 - b. Incremento de aportes en el ejercicio contable.
 - c. Erogaciones efectuadas en el ejercicio contable.
 - d. Resultado Neto.
 - e. Total Patrimonio Neto.

24. La cooperativa no agropecuaria debe indicar los movimientos del Patrimonio neto durante el ejercicio contable.

25. Como mínimo, el Estado de Rendimiento Financiero deberá incluir los renglones siguientes:

Menos: Gastos Directos de Operación
Materias Primas y Materiales
Combustible
Energía Eléctrica
Remuneraciones al personal contratado
Depreciación de Activos Fijos Tangibles
Otros Gastos monetarios y financieros
Gasto por Arrendamiento Estatal
Impuestos, Tasas y Contribuciones
Impuesto sobre las Ventas
Impuesto sobre los Servicios
Impuesto por la Utilización de la Fuerza de Trabajo

Contribución a la Seguridad Social
Otros Impuestos y Tasas
Utilidad o Pérdida en Operaciones

26. Los pagos en concepto de arrendamiento, deben reconocerse como gastos en el momento en que se abonan.

27. Los Gastos de Operación deben analizarse, como mínimo, en:

- a) Materias Primas y Materiales.
- b) Combustible.
- c) Energía Eléctrica.
- d) Remuneraciones al personal contratado.
- e) Depreciación de Activos Fijos Tangibles.
- f) Otros Gastos monetarios y financieros.
- g) Gastos por Arrendamiento.

28. Las tasas, impuestos y contribuciones que figuran en los Estados Financieros son los pagaderos en el ejercicio, y guardan relación con la legislación fiscal vigente.

29. En el caso de las Remuneraciones al personal contratado, en el comprobante de operaciones o soporte documental anexo a este, deberán reflejar la información siguiente:

- a) Fecha.
- b) Nombres y Apellidos del Trabajador contratado.
- c) No. Identidad Permanente.
- d) Importe pagado.
- e) Firma del trabajador contratado.

30. Los anticipos de utilidades a los cooperativistas no representará gastos de la cooperativa.

4.13. DOMINICA

2011 CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT 2 **COMMONWEALTH OF DOMINICA** **ARRANGEMENT OF SECTIONS**

SECTION

PART I PRELIMINARY

1. Short title.
2. Interpretation.
3. Co-operative principles.

PART II REGISTRATION OF CO-OPERATIVE SOCIETIES

4. Requirements for registration.
5. Registrar.
6. Register.
7. Registrar's regulatory powers.
8. Power to issue guidelines.
9. Certificate of Registrar.
10. Power to refuse documents.
11. Verification of documents.
12. Application for registration.
13. Content of and amendment to bye-laws.
14. Effect of bye-laws.
15. Conditions for registration.
16. Registration of co-operative societies.
17. Effect of certificate of registration.
18. Capacity as body corporate.
19. Prohibition on carrying on business contrary to bye-laws and law.
20. Registered office.
21. Display of certificate and maintenance of mandatory records.
22. Inspection and access to records.
23. Suspension and cancellation of registration.
24. Seal.
25. Pre-registration contracts.

PART III MEMBERSHIP AND MEETINGS

26. Application and qualification for, and limitations on, membership.
27. Joint accounts.
28. Membership fees and membership register.
29. Liability of past and present members.
30. Withdrawal of membership.
31. Termination of membership by Board.
32. Termination of membership by members.
33. Suspension of membership.
34. Appeal.
35. Re-admittance.
36. Voting rights of member who is not an individual.
37. Representatives of member who is not an individual.
38. Voting procedure.

- 39. Place of meetings.
- 40. Members not to exercise rights until due payment.
- 41. First general meeting.
- 42. Annual general meeting.
- 43. Special general meeting.
- 44. Meeting called by Registrar.
- 45. Resolution in lieu of meeting.
- 46. Notice of meeting.
- 47. Fixing of record.
- 48. Quorum.
- 49. Delegates.
- 50. Notice of motion.
- 51. Power to make bye-laws.
- 52. Effective date of bye-laws.

PART IV

MANAGEMENT

- 53. Board of directors.
- 54. Officers.
- 55. Provisional directors and elected directors.
- 56. Powers of Board.
- 57. Committees generally.
- 58. Tenure of committees generally.
- 59. Credit committee.
- 60. Duties of credit committee.
- 61. Approval of loans.
- 62. Credit committee reports.
- 63. Removal of members of credit committee by members.
- 64. Removal credit committee by Board.
- 65. Supervisory and compliance committee.
- 66. Duties, functions and powers of supervisory and compliance committee.
- 67. Compliance officer.
- 68. Misappropriation and other contraventions of the Act.
- 69. Meetings of the supervisory and compliance committee.
- 70. Removal of member of supervisory and compliance committee by the committee.
- 71. Removal of member of supervisory and compliance committee by members.
- 72. Election of directors.
- 73. Tenure of directors.
- 74. Additional powers of the Board.
- 75. Validity of acts of directors and officers.
- 76. Indemnification of directors and officers.
- 77. Duty of care of directors and officers.
- 78. Ambit of duty.
- 79. Liability of directors.
- 80. Misuse of confidential information..
- 81. Declaration of interests.
- 82. Disclosure of interest at meetings.
- 83. Pecuniary interests for the purposes of section 82.
- 84. Removal or exclusion of disability.
- 85. Meetings of directors generally.
- 86. Meetings by telephone, etc.

- 87. Attendance at meetings.
- 88. Organisational meeting of directors.
- 89. Director ceasing to hold office.
- 90. Removal of directors.
- 91. Notice of change of directors.
- 92. Declaration by directors and officers.
- 93. Bonding.
- 94. Remuneration of directors.
- 95. Remuneration of officers and employees.

PART V FINANCING

- 96. Shares.
- 97. Share capital.
- 98. Issue of shares.
- 99. Alteration of authorised capital.
- 100. Limitation on purchase of shares.
- 101. Transfer of shares generally.
- 102. Transfer of shares of member of unsound mind.
- 103. Transfer of share or interest on death of member.
- 104. Restrictions on transfer of shares.
- 105. Conditions for the validity of transfer of shares.
- 106. Power of nomination.

PART VI BUSINESS OF CO-OPERATIVE SOCIETY

- 107. Marketing of produce through the co-operative society.
- 108. Creation of charge in favour of a co-operative society.
- 109. Execution of registration of charge.
- 110. Claims unaffected by charge.
- 111. Prior claims in favour of co-operative society.
- 112. Enforcement of charge.
- 113. Assignment of charge.
- 114. Bond as security for charge.
- 115. Lien on shares.
- 116. Deductions applied to loans and shares.
- 117. Purchase of shares.
- 118. Prohibition on purchase of shares.
- 119. Compulsory sale of shares.

PART VII PROPERTY AND FUNDS OF CO-OPERATIVE SOCIETY

- 120. Investment of funds.
- 121. Loan by credit union.
- 122. Prohibited loan.
- 123. Receipt of loans and deposits.
- 124. Receipt of deposits from minors.
- 125. Allocation of surplus.
- 126. Development fund.
- 127. Pension fund.

- 128. Charitable contributions.
- 129. Dividends or bonus.

PART VIII

FINANCIAL DISCLOSURE AND AUDIT

- 130. Annual financial statement.
- 131. Approval of financial statement.
- 132. Providing financial statement.
- 133. Appointment of auditor.
- 134. Qualifications of auditor.
- 135. Disqualifications for auditor.
- 136. Cessation of office of auditor.
- 137. Removal of auditor.
- 138. Filling vacancy of auditor.
- 139. Notice of change of auditor.
- 140. Auditor appointed by Registrar.
- 141. Auditor's right to notice.
- 142. Required notice.
- 143. Auditor's right to make representation.
- 144. Examination by auditor.
- 145. Auditor's right to inspect.
- 146. Error or misstatement.
- 147. Privilege of auditor.
- 148. Annual, monthly and special returns.

PART IX

EXAMINATIONS AND INVESTIGATIONS

- 149. Examinations.
- 150. Investigations.
- 151. Investigations by Court.
- 152. Court Order.
- 153. Powers of investigator.
- 154. Hearing in camera.
- 155. Incriminating statements.
- 156. Absolute privilege respecting statements.

PART X

RECEIVERS AND RECEIVER-MANAGERS

- 157. Appointment of receiver or receiver-manager.
- 158. Functions of receiver.
- 159. Revival of dissolved co-operative society.
- 160. Cessation of Board's powers.
- 161. Duty of receiver or receiver manager.
- 162. Directions by Court.
- 163. Directions by Registrar.
- 164. Required actions by receiver.

PART XI

DISSOLUTION

- 165. Dissolutions by members.
- 166. Notice of dissolution by members.

- 167. Dissolution by Registrar.
- 168. Dissolution for failure to account for business.
- 169. Dissolution by Court.
- 170. Revival of dissolved co-operative society.
- 171. Appointment of liquidator.
- 172. Commencement of liquidation.
- 173. Cessation of business.
- 174. General provisions respecting liquidators.
- 175. Duties of liquidator.
- 176. Powers of liquidator.
- 177. Limitation on liability of liquidator.
- 178. Costs of liquidation.
- 179. Closure of liquidation.
- 180. Custody of records.
- 181. Remuneration of liquidator.
- 182. Continuation of actions.
- 183. Unknown claimant or members.
- 184. Power of Registrar to surcharge.
- 185. Appeal against surcharge.
- 186. Application of Part VIII

PART XII RECONSTRUCTION OF CO-OPERATIVE SOCIETIES

- 187. Methods of reconstruction.
- 188. Conversion.
- 189. Effect of certificate of registration.
- 190. Amalgamation of co-operative societies.
- 191. Transfer of assets of co-operative societies.
- 192. Claims of objecting creditors.
- 193. Division of co-operative society.
- 194. Effect of registration of new co-operative societies.

PART XIII DISPUTES

- 195. Settlement of disputes.
- 196. Co-operative Societies Appeals Tribunal.
- 197. Case stated on question of law.
- 198. Enforcement of award and recovery of loans.

PART XIV SPECIALISED CO-OPERATIVE SOCIETIES

Credit Unions

- 199. Functions of Registrar, immunity, sanctions and corrective action.
- 200. Restrictions.
- 201. Liquid assets.
- 202. Loan loss provisions.
- 203. Loan approval.
- 204. Security on loans.
- 205. Loan limits.
- 206. Reporting loans.

- 207. Interest on loans.
- 208. Acceptance of deposits.
- 209. Credit union trusts.
- Consumers Co-operative Societies and Housing Cooperative Societies
- 210. Restrictions on directorship.
- 211. Relationship with members.
- 212. Bye-laws.
- 213. Amendment of bye-laws.
- 214. No interest on share capital.
- 215. Right to possession terminated.
- 216. Abandoned goods.
- Industrial Co-operative Societies
- 217. Membership.
- 218. Bye-laws.
- 219. Restriction on registration.
- 220. Bonus based on labour.
- 221. Employees may be directors.

PART XV

APEX BODY

- 222. Establishment and constitution of apex body.
- 223. Functions.
- 224. Officers.
- 225. Consultation with Registrar.

PART XVI

OFFENCES

- 226. Corrupt practices and bribery.
- 227. Falsely obtaining property of co-operative society.
- 228. Failure to comply with Act.
- 229. Dealing in property subject to charge.
- 230. Offences with respect to reports.
- 231. Contravention of Act.
- 232. Use of words "credit union" "co-operative".
- 233. Court order to comply.
- 234. Limitation.
- 235. Preservation of civil remedy.

PART XVII

ABANDONED PROPERTY HELD BY CREDIT UNIONS

- 236. Abandoned property in credit union.
- 237. Report, publication and disposal of abandoned property.
- 238. Sale and handing of proceeds of sale of abandoned property.
- 239. Claims on abandoned property.
- 240. Penalties for failure to file abandoned property report.

PART XVIII

MISCELLANEOUS

- 241. Interpretation.
- 242. Execution and filing.

- 243. Waiver of notice.
- 244. Certificate of co-operative society.
- 245. Document.
- 246. Alteration.
- 247. Rectification and correction.
- 248. Exemption from stamp duty and other taxes.
- 249. Limitation jurisdiction.
- 250. Proof of entries in books and other documents.
- 251. Immunity of Registrar and staff.
- 252. Regulations.

PART XIX TRANSITIONAL

- 253. Interpretation.
- 254. Existing directors and officers.
- 255. Co-operative societies, etc., registered under the former Act.
- 256. Repeal

SCHEDULE COMMONWEALTH OF DOMINICA ACT No. 2 OF 2011

I assent

NICHOLAS JOSEPH ORVILLE LIVERPOOL

President

15th April, 2011

AN ACT to make new provision with respect to the registration, supervision, governance, operation and management of co-operative societies including credit unions, the members of which have a common bond of philosophy and socio-economic objectives, and for incidental and related purposes.

(Gazetted 5th May, 2011)

BE IT ENACTED by the Parliament of the Commonwealth of Dominica as follows:

PART I PRELIMINARY

1. This Act may be cited as the -
CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 2011.

Short title.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires-
“amendment”, in relation to bye-laws, includes the making of a new bye-law and the alteration, substitution or revocation of a bye-law;

“apex body” means a body established under section 222;

“associate” means—

- (a) immediate relatives of a person including a spouse or children (including step-children) and their spouses, a parent, brother or sister;
- (b) any co-operative society which holds twenty percent or more of a co-operative society's shares in accordance with section 100;
- (c) any company or co-operative society in which the co-operative society holds twenty per cent or more of shares to which voting rights are attached;

(d) a member of the Board or committee, an employee of a co-operative society, or a business partner;

(e) any company or co-operative society over which a co-operative society has control; or

(f) any company or co-operative society of which any of the persons referred to in paragraph (c) is a director, manager or has control, notwithstanding that at the relevant time any of the persons in question, not being individuals, have not yet come into existence or have ceased to exist;

“Board” means the Board of directors or other directing body, by whatever name called, to whom the management of the affairs of a co-operative society is entrusted;

“auditor” means the external auditor appointed under section 133;

“bonus” means a share of the profits of a co-operative society divided among its members in proportion to the volume of Interpretation.

business done with the co-operative society by them from which the profits of the co-operative society were derived;

“bye-laws” means the registered bye-laws made by a co-operative society under this Act and includes a registered amendment of the bye-laws;

“capital base” means—

(a) paid up capital being qualifying and equity shares paid up in cash and invested as risk capital by the members and forming a permanent part of the capital of the co-operative society and which are redeemable only upon transfer to another member; and

(b) institutional capital, less any amount by which that total has become impaired by operating or other losses;

“CARICOM Member State” means a Member State of the Caribbean Community established by the Revised Treaty of Chaguaramas signed at Nassau, The Bahamas on 5 July 2001;

“central co-operative society” means a co-operative society whose membership comprises co-operative societies providing technical and other services;

“central credit union” means a credit union whose membership comprises principally other credit unions and generally provides liquidity services, deposit facilities and investment opportunities to members;

“consumers’ co-operative society” means a co-operative society whose primary purpose is to purchase, procure, process, manufacture, exchange, hire or deal in goods or services for sale at retail to its members who are to be the ultimate users or consumers of those goods and services;

“co-operative society” means a self-help, collectively owned and democratically controlled business enterprise registered under this Act, which consists of a group of people linked by a common bond based on community, organizational or employee affiliation that provides socially desirable and economically beneficial services to its participating members on a joint action and not-for-profit basis;

“credit union” means a co-operative society organised by a group of people with a shared field of membership for provident and productive purposes and providing cooperatively pooled financial services to its members, including savings and lending business;

“delinquent loan” means a loan in relation to which a borrower has defaulted on the agreed terms of repayment;

“deposit” means a sum of money paid on terms—

(a) under which the sum will be repaid, with or without interest or a premium, and either on demand or at a time or in circumstances agreed by or on behalf of the person making the payment and the person receiving it; and

(b) which are not referable to the provisions of property or services or to the giving of security, and for the purposes of this definition, money is paid on terms which are referable to the provision of property or services or the giving of security if—

(i) it is paid by way of advance or part payment for the sale, hire or other provision of property or services of any kind and is repayable only in the event that the property or services is or are not in fact sold, hired or otherwise provided;

(ii) it is paid by way of security for payment for the provision of property or services of any kind provided or to be provided by the person by whom or on whose behalf the money is accepted; or

(iii) it is paid by way of security for the delivery up or return of any property, whether in a particular state of repair or otherwise;

“deposit guarantee” means a fund set up to insure the deposits of members of a credit union against loss in the event that the credit union fails;

“director”, means a member of the Board who is elected in accordance with section 72;

“dividend” means a share of the surplus of a co-operative society divided among its members in proportion to the share capital held by them;

“equity shares” constitutes the common stock or risk capital including qualifying shares purchased by individual and institutional members as their ownership stake in the safety, soundness and competitiveness of their co-operative society;

“Financial Services Unit” means the Financial Services Unit established under section 3 of the Financial Services Unit Act 2008;

“guidelines” means the guidelines issued under section 8;

“housing charges” means the fee charged by a housing cooperative society to its members to cover the costs of providing housing accommodation;

“housing co-operative society” is a co-operative society that owns real estate and where each shareholder in the society is granted the right to occupy one housing unit;

“housing unit” means housing accommodation intended for individual or family use;

“industrial co-operative society” means a co-operative society whose primary purpose is to operate an enterprise in which Act No. 18 of 2008 its members are the workers necessary for the operation;

“institutional capital” means the aggregate of a co-operative society’s—

- (a) statutory or other non-distributable general reserves;
- (b) earnings retained after distribution of surplus; and
- (c) such other funds which may be received by way of non-refundable donations for no specified purpose which are not available for distribution;

“legal representative” in relation to a co-operative society, member or other person means a person who stands in place of and represents the co-operative society, member or other person and includes a trustee, executor, administrator, assignee, or receiver of the co-operative society, member or other person;

“member” includes a person or co-operative society joining in the application for the registration of a co-operative society, and a person or co-operative society admitted to membership after registration in accordance with this Act and the byelaws;

“Minister” means -

- (a) in relation to credit unions, the Minister responsible for finance;
- (b) in relation to other co-operative societies the Minister responsible for co-operatives;

“minor” means an individual under the age of fifteen years;

“officer” includes a president, vice president, secretary, treasurer, director or other person empowered under this Act or the Regulations or bye-laws to give directions in regard to the business of a co-operative society;

“primary co-operative society” means a co-operative society that is owned by individual members;

“qualifying shares” means the mandatory, non-withdrawable minimum shares to be purchased by an approved applicant to be admitted and to enjoy the full rights and privileges of becoming a member of a co-operative society;

“Register” means-

- (a) in the case of credit unions, the Register of Credit Unions to be kept under section 6(b);
- (b) in the case of co-operative societies other than credit unions, the Registrar of Co-operative Societies to be kept under section 6 (a);

“Regulations” means the Regulations made under section 252;

“secondary co-operative society” means a co-operative society that is owned by an association of primary co-operative societies;

“security” when issued by a co-operative society—

- (i) means a share or a debt obligation of a cooperative society; and
- (ii) includes a certificate confirming the share or debt obligation;

“security interest” means an interest in or charge on the property of a co-operative society by way of a mortgage, charge, hypothec pledge or other obligation taken by a creditor to secure payment of a debt of the co-operative society;

“special resolution” means a resolution—

- (a) at least ten days’ notice of which has been given specifying the intention to propose the resolution as a special resolution, that is passed by a majority of at least three-fourths of

the members or delegates of a co-operative society who voted at a general meeting with respect to that resolution; or

(b) at least ten days' notice of which has been given that is approved by written affirmative vote of at least three-fourths of the members of the cooperative society who—

(i) voted on that resolution within the prescribed time and in the prescribed manner;

(ii) cast a written vote in the manner and within the time specified in the notice; or

(iii) that is consented to in writing by all of the members or delegates of the co-operative society who are entitled to vote at a general meeting on that resolution;

“stabilisation fund” means a facility to provide technical assistance, advice and limited financial assistance to credit unions that are experiencing solvency problems or are insolvent;

“statutory reserves” means the reserves established under section 125(1)(b);

“tertiary co-operative society” means a co-operative society that is owned by an association of secondary co-operative societies;

“Tribunal” means the Co-operative Societies Appeals Tribunal established under section 196;

(2) In this Act a reference to “the Registrar” shall –

(a) in relation to a credit union, be construed as a reference to the Director of the Financial Services Unit;

(b) in relation to a co-operative society other than a credit union, be construed as a reference to the Registrar of Co-operatives appointed under section 5(1).

3. (1) For the purposes of this Act, a co-operative society conforms to co-operative principles if—

(a) each member or delegate, other than in a secondary or tertiary co-operative society, has no more than one vote;

(b) no member or delegate is entitled to vote by proxy;

(c) its membership is open, voluntary and available without any artificial restriction or any unlawful basis of discrimination, to any person who can use its services and is willing to accept the responsibility of membership;

(d) its business is carried on primarily as an economic activity for the benefit of its members;

(e) its primary concerns are its institutional capacity and financial strength, including adequate reserves, retained earnings and internal systems designed to ensure continuous growth and service to members;

(f) it utilises any surplus or savings arising out of its operations—

(i) to strengthen its business;

(ii) to provide or improve common services to its members;

(iii) for the payment of dividends on permanent ownership capital purchased by its members;

(iv) among its members in proportion to the business done by each member with the cooperative society;

(v) to educate its members, employees, directors, committee members and the general public in the principles and techniques of economic and democratic cooperation; and Co-operative principles

- (vi) for non-profit, charitable, benevolent or cultural purposes;
 - (g) it pursues co-operation with other co-operative societies;
 - (h) it provides for continuing education and training; and
 - (i) it contributes to the social and economic development of its community.
- (2) A co-operative society shall conform to the cooperative principles set out in subsection (1).

PART II

REGISTRATION OF CO-OPERATIVE SOCIETIES

4. (1) A person shall not carry on the business of a cooperative society unless it is registered under this Act.

(2) A person who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable on conviction to a fine not exceeding one hundred thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding three years.

5. (1) Subject to subsection (2), there shall be a Registrar of Co-operative Societies who shall be a public officer appointed by the Public Service Commission and whose duty is to regulate cooperative societies.

(2) For the purposes of regulating credit unions, the Registrar is the Director of the Financial Services Unit.

(3) The Registrar shall be assisted by professional and administrative staff, and may delegate duties to any other person Requirement for registration.

Registrar or agent under his or her control as is necessary to enable the Registrar to perform his or her regulatory duties and to exercise the powers conferred on the Registrar under this Act.

(4) The Registrar shall—

- (a) register all viable co-operative societies;
- (b) inspect and monitor all co-operative societies;
- (c) supervise and regulate all co-operative societies;
- (d) lead and manage the regulatory process;
- (e) stimulate community awareness; and
- (f) initiate and encourage capacity development activities beneficial to co-operative societies.

6. The Registrar shall-

(a) in the case of co-operative societies other than credit unions, keep and maintain a register to be known as the "Register of Co-operative Societies" in which the Registrar shall record the details of all co-operative societies registered under this Part; or

(b) in the case of credit unions, keep and maintain a register to be known as the "Register of Credit Unions" in which the Registrar shall record the details of all credit unions registered under this Part.

7. (1) Where—

(a) after an examination of a co-operative society or on the receipt of any information, the Registrar is of the opinion that the funds of the co-operative society are not being properly managed or protected; or Register.

Registrar's regulatory powers.

(b) the Registrar has reason to believe that a cooperative society is likely to take any action that would affect the financial soundness of the cooperative society, the Registrar may—

(i) by notice in writing, direct the Board within such period as the Registrar may specify, to cease such action or such practice as the Registrar may specify or to take such measures as the Registrar considers necessary to protect the funds of the co-operative society or the interests of the co-operative society's members; and

(ii) place a co-operative society under administrative supervision and appoint a person who in the Registrar's opinion, has the necessary experience and training to supervise or advise the co-operative society on the action to be taken to remedy the situation.

(2) A person appointed under subsection (1)(b)(ii) shall hold office for a period not exceeding twelve months and on such terms as the Registrar shall specify.

(3) A person appointed under subsection (1)(b)(ii) may be paid such remuneration as the Registrar may determine, and such remuneration, and any other expenses of and incidental to the appointment, shall be defrayed out of the funds of the cooperative society.

(4) Notwithstanding sections 23 and 228 of this Act, where it appears to the Registrar that a requirement in this Act, the Regulations or the bye-laws is being contravened, but the circumstances are not such as to justify the taking of action under section 228 or the suspension of registration under section 23, the Registrar may give such directives to the co-operative society or person, as seems appropriate.

(5) A director, committee member, employee or agent of a co-operative society shall at all times give all information required by a person appointed under subsection (1)(b)(ii), for the full and satisfactory performance of his or her duties; and for this purpose section 149 applies as if any reference in that section to the Registrar included a reference to a person appointed under subsection (1)(ii).

(6) A person appointed under subsection (1)(b)(ii) shall report to the Registrar, in the manner and with the frequency that the Registrar may direct, on the affairs of the co-operative society.

(7) A co-operative society or a person that is required to take any action under this section, may within twenty-one days of the service of the notice by the Registrar, make representation in writing to the Registrar as to why the action required should not be taken.

(8) Where the co-operative society fails to comply with the notice referred to in subsection (1)(b)(i), after giving the Board the opportunity to be heard in a general meeting called by the Registrar for the purpose, the Registrar may—

(i) remove from office; or

(ii) suspend from office for such period as the Registrar considers appropriate, all or any of the directors of the co-operative society and direct that the co-operative society be managed by such persons as he may appoint for a period not exceeding fifteen months.

(9) Where a director is suspended under this section, the remaining directors shall be regarded as constituting the Board.

(10) Where all the directors are removed under this section, persons appointed under this section shall exercise all the powers and perform all the functions of a duly constituted Board and shall make arrangements prior to the end of their term of management for the election of a new Board in accordance with the bye-laws of the co-operative society.

8. (1) The Registrar may, after consultation with co-operative societies, issue guidelines in respect of—

(a) prudential standards to be observed by co-operative societies to ensure the safety and soundness of the funds of co-operative societies;

(b) the management and investment of the funds of co-operative societies;

- (c) the classification of loans, management of delinquent loans, the calculation of the reserve for loan loss;
- (d) self insurance arrangements;
- (e) anti-money laundering and combating the financing of terrorism, and
- (f) any other matter necessary to give effect to this Act and Regulations made under this Act.

(2) Where the Registrar intends to make any substantive modification to the guidelines, the Registrar shall consult with co-operative societies.

(3) The Registrar shall—

(a) make the guidelines and all amendments to the guidelines available for inspection by the public; and

(b) on payment of any prescribed fee, provide copies of the guidelines and all amendments to them the public.

(4) The Registrar shall, at such intervals as the Registrar determines, review any guidelines in force.

Power to issue guidelines.

(5) The Registrar shall publish the guidelines issued under this section and any amendment to the guidelines in the *Gazette*.

9. (1) The Registrar may issue a person with a certificate stating that—

(a) a document required to be sent to the Registrar has or has not been received by the Registrar;

(b) a name, whether that of a co-operative society or not, is or is not on the Register; and

(c) a name, whether that of a co-operative society or not, was or was not on the Register on a stated date.

(2) An officer authorised by the Registrar may sign a certificate issued under this section.

(3) The signature required under subsection (2) may be printed or mechanically reproduced on the certificate.

(4) A certificate mentioned in subsection (2) is admissible in evidence as conclusive proof of the facts stated in the certificate without proof of the office or signature of the person purporting to have signed the certificate.

10. (1) The Registrar may refuse to receive, file or register any document that in his or her opinion—

(a) contains any matter contrary to law;

(b) has not, by reason of any omission or error in description, been properly completed;

(c) does not comply with the requirements of this Act;

(d) contains any error, alteration or erasure;

Power to refuse documents.

Certificate of Registrar.

(e) is not legible; or

(f) is not durable.

(2) The Registrar may request in respect of a document refused under subsection (1)—

(a) that it be amended or completed and resubmitted; or

(b) that a new document be submitted in its place.

11. The Registrar may require that a document or information contained in a document required by this Act or the Regulations to be sent to the Registrar be verified by affidavit or otherwise.

12. (1) Subject to subsection (2), an applicant for registration of a co-operative society under this Part shall submit the application to the Registrar in the prescribed form and in such manner as the Registrar may determine.

(2) An application under subsection (1) shall be signed—

(a) in the case of a co-operative society of which no member is registered as a co-operative society, by at least one-third of the total membership of the co-operative society;

(b) in the case of a co-operative society where not all members of the co-operative society are registered co-operative societies, by at least threequarters of the total membership of the cooperative society; and

(c) in the case of a co-operative society where all the members are registered as co-operative societies, on behalf of at least two such co-operative societies.

(3) An application under subsection (1) must be accompanied by—

Verification of documents.

Application for registration.

(a) three copies of the proposed bye-laws of the cooperative society;

(b) the prescribed application fee; and

(c) such other information in respect of the cooperative society as the Registrar may require.

13. (1) A co-operative society shall include in its byelaws provisions—

(a) respecting its objects, core business and conditions of membership, including—

(i) the rights of joint members, if any;

(ii) the qualification for membership, the withdrawal of members and the transfer of membership;

(iii) the amount of the membership fee and the annual subscription, if any, to be paid by members;

(iv) the conditions on which membership ceases or may be terminated, the disposition that may be made on cessation or termination of a member's interest and the determination of the value of the member's interest; and

(v) the minimum value of equity shares that may be held by each member;

(b) respecting voting rights and the rights of making, amending and repealing bye-laws, the right of a member to vote by ballot and the manner, form and effect of votes at meetings;

(c) respecting the quorum for meetings;

(d) respecting directors, officers and members of the committees of directors—

Content of an amendment to bye-laws.

(i) their qualifications, terms of office and removal;

(ii) the filling of vacancies; and

(iii) their powers and duties;

(e) respecting the address of the co-operative society;

(f) respecting the distribution of the property of the co-operative society on dissolution;

(g) respecting the borrowing powers of the cooperative society and the procedure for exercising those powers; and

(h) respecting any matters, in addition to those set out in paragraphs (a) to (g) that the members may consider necessary or desirable.

(2) Subject to subsection (3), where the bye-laws require a greater number of votes of directors or members than that required by this Act to effect any action, the bye-laws shall prevail.

(3) The bye-laws must not require a greater number of votes of members to remove a director than the number required for a special resolution.

(4) Subject to this Act and the bye-laws, the members of a co-operative society may, at an annual general meeting or a special meeting, amend the bye-laws by special resolution if notice of the proposed amendment together with notice of the meeting is given—

(a) by sending the notice by mail to the members, at the addresses given in the register of members; or

(b) by publishing the notice in not less than two issues of a newspaper published and circulated in Dominica, or by posting the notice in a place or through a medium of communication that, as stipulated in the bye-laws and in the opinion of the Board, is prominent and accessible to members.

(5) An amendment to the bye-laws shall be submitted by the co-operative society to the Registrar for registration in accordance with subsection (6) and no amendment is valid until it has been registered.

(6) An application to register an amendment of the byelaws shall be accompanied by three copies of the amendment certified to be true copies by the secretary and president of the cooperative society together with a copy of the resolution.

(7) On being satisfied that an amendment of the bye-laws is not contrary to this Act, the Regulations or the guidelines, the Registrar shall register the amendment.

(8) On registration of an amendment of the bye-laws of a co-operative society, the Registrar shall send to the cooperative society a certified copy of the amendment, which shall be conclusive evidence of the fact that the amendment has been duly registered.

(9) If the Registrar refuses to register an amendment—

(a) the Registrar shall notify the co-operative society in writing of the refusal, the reasons for the refusal and of the co-operative society's right to appeal under paragraph (b); and

(b) the co-operative society may, within twenty-one days of the notice of refusal, appeal to the Tribunal.

14. The bye-laws of a co-operative society when registered Effect of bye-laws bind the co-operative society and its members to the same extent as if they—

(a) had been signed and sealed by the co-operative society and by every member; and

(b) contained covenants on the part of each member and the legal representative of each member to observe the bye-laws.

15. (1) The Registrar shall not register, or having been registered, shall not continue the registration of a co-operative society registered under this Part-

(a) unless its membership consists-

(i) in the case of a credit union, of not less than one hundred members;

(ii) in the case of any other co-operative society, of not less than ten members;

(b) unless it is economically viable and has provision for equity capital expansion and continuous business growth;

(c) unless there is conformity among its membership with all the co-operative principles set out in section 3;

(d) unless the word "Co-operative" or "Credit Union" as the case may be forms part of the name of the co-operative society, and, in the case of a cooperative society registrable under subsection (2), the words "Junior Cooperative" form part of the name of the co-operative society;

(e) in the case of a co-operative society to be registered with limited liability—

(i) unless the word "Limited" is the last word of the name of the co-operative society; and Conditions for registration.

- (ii) in the case of a primary co-operative society, unless each member of the primary cooperative society is a shareholder and has one vote in the democratic proceedings of the cooperative society;
 - (f) if the name of the co-operative society is identical to that of another co-operative society or so nearly resembles the name of another cooperative society as to be likely to mislead the members of the public as to its identity;
 - (g) unless it has and maintains an address in Dominica to which all notices and communications may be sent;
 - (h) unless its bye-laws conform to this Act;
 - (i) unless it complies with the guidelines issued;
 - (j) unless its policies in respect of shares, loans, deposits and investments are documented and comply with this Act; and
 - (k) unless, within sixty days after the issue of the certificate of registration, the co-operative society paints or affixes its registered name in letters that are easily legible in a conspicuous position on the outside of the place where the business of the cooperative society is carried on;
 - (l) unless it has commenced business within ninety days of its registration under this Act;
 - (m) unless it complies with the law in force in Dominica relating to anti-money laundering, proceeds of crime and anti-terrorism.
- (2) The Registrar may register as a junior co-operative a co-operative society whose membership consists solely of members of a school, club or cultural organisation who are under the age of fifteen years.
- (3) In the determination of the viability of an applicant or existing co-operative society the Registrar may have regard to—
- (a) the demand for the proposed or current services;
 - (b) the capital base of the co-operative society;
 - (c) the co-operative society's membership and business size, growth and growth potential; and
 - (d) the capacity of the co-operative society to sustain management and audit costs.
- (4) A registered cooperative society shall implement suitable measures, procedures and policies to counter money laundering and to combat the financing of terrorism.
- (5) Notwithstanding the generality of subsection (4), every registered cooperative society shall, in addition to complying with the provisions of this Act and Regulations made under this Act, also comply with the following-
- (a) any relevant provisions of the Money Laundering (Prevention) Act 2000 and any Regulations made under it;
 - (b) any relevant provisions of the Suppression of the Financing of Terrorism Act 2003;
 - (c) any relevant provisions of the Financial Services Unit Act 2008;
 - (d) any other relevant financial services legislation promoting good governance, financial accountability and made to safeguard against money laundering and financing of terrorist activity.

16. (1) Where the Registrar is satisfied that an application has been made in accordance with this Act, the Registrar shall, Act No. 31 of 2003.
Act No. 18 of 2008.
Registration of cooperative societies.
Act No. 20 of 2000.
within three months of the receipt of the application, register the co-operative society and its bye-laws and issue the co-operative society with a certificate of registration in the prescribed form.

(2) The Registrar shall register the name under which a co-operative society is registered under this Act in the Gazette and note it in the Register.

(3) Where the Registrar refuses to register a co-operative society, the Registrar shall give the applicant reasons in writing for the refusal.

17. (1) Except for a co-operative society that is to be taken to be registered under section 255, a co-operative society comes into existence on the date shown in its certificate of registration.

(2) A certificate of registration issued by the Registrar to a co-operative society is conclusive proof that the co-operative society named in the certificate is registered under this Act and has complied with all the requirements of registration under this Act.

18. The registration of a co-operative society renders it a body corporate and, subject to this Act and its bye-laws, it has the capacity, rights, powers and privileges of a body corporate in accordance with section 55 of the Interpretation Act.

19. A co-operative society shall not—

(a) carry on a business or exercise a power that is restricted or prohibited by its bye-laws or by any law in force in Dominica; or

(b) exercise any of its powers in a manner contrary to its bye-laws.

20. (1) A co-operative society shall at all times establish and maintain a registered office and it shall specify the address of the Effect of certificate of registration.

Capacity as body corporate.

Prohibition on carrying on business contrary to bye-laws.

Registered office.

office in the bye-laws.

(2) Subject to subsection (3), the directors of a cooperative society may change the address of the registered office.

(3) A co-operative society shall inform the Registrar of an intention to change the address of its registered office at least one month prior to the change being made.

21. (1) A co-operative society shall display a copy of its certificate of registration and keep a copy displayed in a conspicuous place in the public part of any place of business of the co-operative society.

(2) A co-operative society shall make available at all reasonable times at its registered office—

(a) a copy of this Act and the Regulations;

(b) a copy of its bye-laws;

(c) the register of members;

(d) the minutes of all meetings and resolutions of its members;

(e) copies of all notices of directors and notices of change of directors;

(f) a register of its directors setting out the names, addresses and occupations of all persons who are or have been directors of the co-operative society with the dates on which each person became or ceased to be a director;

(g) a copy of every certificate issued to it by the Registrar;

(h) a copy of every order of the Registrar relating to the co-operative society;

Display of certificate and maintenance of mandatory records.

(i) a copy of the monthly financial statements of the co-operative society;

(j) a copy of the last audited financial statements of the co-operative society;

(k) a copy of the auditor's report;

- (l) a copy of the shares transfer register and investment reports; and
- (m) the minutes of all meetings and resolutions of its directors and committees.

22. (1) The Registrar may, during the normal business hours of a co-operative society, observe practices, monitor operations and inspect or authorise the inspection of the co-operative society, including any of the records listed in section 21(2).

(2) Members of a co-operative society, their agents and their legal representatives may, during the normal business hours of the co-operative society, examine any of the records specified in section 21(2)(a) to (k).

23. (1) The Registrar may by order in writing suspend the registration of a co-operative society for a period not exceeding twelve months if the Registrar is satisfied that—

- (a) the co-operative society is in breach of any condition of registration;
- (b) the co-operative society is in breach of any requirement of sections 4 or 15;
- (c) the co-operative society or any officer of the cooperative society has failed or refused to comply with any obligation imposed by, or any requirement of this Act, regulations made under this Act or its bye-laws;
- (d) the Registrar has not received from the cooperative society any return notice or other Suspension and cancellation of registration.

Inspection and access to records.

document or fee required by this Act or the Regulations to be sent to it; or

- (e) the co-operative society has failed to comply with any directive given by the Registrar under section 7 or guidelines issued under section 8.

(2) The Registrar may by order in writing cancel the registration of a co-operative society if—

- (a) the co-operative society does not commence business within ninety days of its registration under this Act;
- (b) the number of members has been reduced to less than the number required for the registration of the co-operative society;
- (c) the registration has been obtained by fraud or mistake; or
- (d) the co-operative society has not within a period of suspension under subsection (1) rectified the reason for its suspension; but the Registrar shall not cancel the registration of a co-operative society under paragraph (b) if the co-operative society includes among its members one or more registered co-operative societies.

(3) The Registrar shall by order in writing cancel the registration of a co-operative society if—

- (a) the co-operative society gives notice to the Registrar that it has ceased to carry on business;
- (b) the co-operative society is dissolved;
- (c) the co-operative society is amalgamated with one or more other co-operative societies or bodies corporate; or
- (d) the co-operative society is bankrupt within the meaning of the Bankruptcy Act.

(4) An order under subsections (1), (2) or (3) shall take effect from the date of the order.

(5) The Registrar shall not make an order under subsections (1), (2) or (3) until the Registrar has given the co-operative society an opportunity to be heard.

(6) Immediately after the Registrar has suspended or cancelled the registration of a co-operative society the Registrar shall publish a notice of the suspension or cancellation in -

- (a) the *Gazette*;
- (b) not less than two issues of a newspaper published and circulated in Dominica; and
- (c) any other appropriate medium of communication that, in the opinion of the Registrar is prominent and accessible to the public.

(7) Where the registration of a co-operative society is cancelled by order under this section or any other section the cooperative society shall, except for the purpose of winding up, cease to exist as a body corporate from the date on which the order takes effect.

24. (1) The Board may by resolution-

- (a) adopt an official seal;
- (b) change the official seal adopted under paragraph (a); and
- (c) determine which of its directors, officers or agents shall sign instruments to which the official seal is affixed.

Seal.

(2) An instrument of agreement executed on behalf of a co-operative society by a director, an officer or an agent of the cooperative society is not invalid merely because an official seal is not affixed to it.

25. (1) Except as provided in this section, a person who enters into a written contract in the name of or on behalf of a cooperative society before it comes into existence is personally bound by the contract and is entitled to the benefits of the contract.

(2) Within a reasonable time after a co-operative society comes into existence, it may, by any action or conduct signifying its intention to be bound by it, adopt a written contract made in its name or on its behalf, before it came into existence.

(3) Subject to subsection (4) and (5), where a co-operative society adopts a contract under subsection (2)-

(a) the co-operative society is bound by the contract and is entitled to the benefits of it as if the cooperative society had been in existence at the date of the contract and had been a party to it; and

(b) a person who purported to act in the name of the co-operative society or on its behalf ceases to be bound by or entitled to the benefits of the contract.

(4) Except as provided in subsection (5), whether or not a written contract made before the coming into existence of a cooperative society is adopted by the co-operative society, a party to the contract may apply to a court for an order fixing the obligations under the contract as joint or joint and several, or apportioning liability between or among the co-operative society and a person who purported to act in the name of the co-operative society or on its behalf; and the court may on the application make any order it thinks fit.

(5) If expressly so provided in a written contract, a person Pre-registration contracts. who purported to act for or on behalf of the co-operative society before it came into existence is not bound by the contract or entitled to the benefits of the contract.

PART III

MEMBERSHIP AND MEETINGS

26. (1) An application for membership of a co-operative society shall be submitted to the Board in such form as the Board may approve.

(2) In order to qualify for the membership of a cooperative society, a person, other than a registered co-operative society-

(a) shall be a citizen or resident of Dominica or a citizen of another CARICOM member state;

(b) shall not be an undischarged bankrupt;

(c) shall not be of unsound mind; and

(d) except in the case of a junior co-operative, shall be fourteen years of age or over.

(3) Where the co-operative society is a credit union, an individual who is over fifteen years of age but who has not yet attained the age of eighteen years may be admitted as a

member and subject to subsections (4) and (5) may enjoy all the rights of membership and be subject to all the liabilities of membership.

(4) Where a member referred to in subsection (3) is required to execute any instrument or give any receipt, he or she may only do so by his or her parent or guardian.

(5) A member of a co-operative society who has not attained the age of eighteen years does not qualify to obtain credit from a co-operative society of which he or she is a member.

Application and qualification for, and limitations on membership.

(6) The Board shall cause each applicant for membership to be notified in writing that his or her application has been approved or disapproved.

(7) Subject to subsection (8), a person may be a member of more than one co-operative society if-

(a) the person has disclosed in his or her application for membership of a co-operative society the name of any other co-operative society of which the person is a member; and

(b) the co-operative societies both have as a primary object the granting of loans to their members and the person has fully disclosed to the first cooperative society that he or she has applied for membership of the second co-operative society.

(8) A person who is a member of a credit union shall not apply for membership of another credit union unless his or her application is accompanied by the written consent of the credit union of which he or she is already a member to his or her proposed dual membership.

(9) Where a person becomes a member of more than one credit union, the Secretary or Manager of the second or subsequent credit union shall so inform the Registrar with fourteen days of the grant of membership.

27. Subject to the bye-laws, where individuals have separate and independent membership in a co-operative society, joint accounts may be held.

28. (1) A person shall not exercise the rights of membership of a co-operative society unless the person has paid the prescribed membership fee and has satisfied any other requirement which may be specified in the bye-laws.

Joint accounts.

Membership fees and membership register.

(2) A co-operative society shall keep a register of members in which it shall record—

(a) the names and addresses of its members; and

(b) the date on which a person becomes a member and the date, if any, on which the person ceases to be a member; and

(c) such other details as may be prescribed.

29. (1) Subject to this Act, the liability of a current member of a co-operative society is limited to the unpaid amount of his or her subscription for shares.

(2) The liability of a past member or the estate of a deceased member for debts of a co-operative society as they existed on the date on which the member ceased to be a member or died continues for a period of two years after the cessation of membership or death.

30. (1) A member of a co-operative society may at any time withdraw from membership of the co-operative society in such a manner as may be prescribed by the bye-laws or the Regulations.

(2) Withdrawal of membership from a co-operative society shall be by written notice addressed to the Board.

(3) Withdrawal of membership from a co-operative society does not affect any existing liability of the member to the co-operative society.

31. (1) Subject to the bye-laws, the Board may, by a vote of at least two-thirds of the directors present at a meeting called for the purpose, order the termination of membership of a member of a co-operative society.

Withdrawal of membership.

Termination of membership by Board.

Liability of past and present members.

(2) Where the Board terminates the membership of a member under this section—

(a) the Board shall—

(i) within a period of one year, purchase from the member at par value all shares in the cooperative society held by the member; and

(ii) pay to the member all amounts held to the member's credit, together with any interest accrued on those amounts and the amount outstanding on loans made to the co-operative society by the member with any interest accrued on those amounts;

(b) the secretary of the co-operative society shall, within ten days from the date on which the order is made, notify the member of the order in writing;

(c) the member may appeal from the order to the next general meeting of the co-operative society by giving written notice of his or her intention to

appeal to the secretary within thirty days from the date the member received notice of the order under paragraph (b); and

(d) and if the member appeals under paragraph (c), a majority or any greater percentage that may be specified in the bye-laws, of the members present at the general meeting shall confirm or rescind the order.

(3) Where the address of a member the termination of whose membership is ordered under subsection (1) is unknown to the co-operative society after all reasonable efforts have been made to ascertain the member's address for the purpose of making payment to him or her of all amounts held to his or her credit, the co-operative society shall transfer those amounts to its statutory reserves.

(4) Where any amounts are transferred under subsection (3), the co-operative society shall pay those amounts to the person entitled to them on proof of the person's claim that is satisfactory to the co-operative society.

(5) Where a co-operative society transfers amounts held to the credit of a member under subsection (3), it shall immediately submit to the Registrar a return showing—

(a) the member's name;

(b) the member's last known address; and

(c) the amounts transferred.

32. Members may terminate the membership of a member where—

(a) the member has received at least ten days notice of the general meeting at which his or her membership is to be considered; and

(b) the termination is approved by a majority of at least two-thirds of the members who—

(i) are present at the general meeting; and

(ii) cast votes on the resolution.

33. Subject to the bye-laws, the Board may by notice in writing suspend a member for a period not exceeding three months if they are satisfied that the member is guilty of misconduct.

34. (1) Subject to subsection (2), where a person's membership is terminated under section 31 or 32, or suspended under section 33, the person may appeal against the termination or suspension to the Registrar in the prescribed manner and the Registrar shall confirm or set aside the resolution terminating or suspending the membership.

(2) A person whose membership is terminated for failure to pay fees, assessments, rent or occupancy charges or to fulfil Suspension of membership.

Appeal.

Termination of membership by members.

other financial obligations to the co-operative society is not eligible to appeal against the termination of his or her membership to the Registrar under subsection (1).

(3) Where a person appeals against the termination of his or her membership under section 31(2)(c) or this section, notwithstanding the resolution terminating his or her membership, the person continues to be a member until the termination of his or her membership is confirmed by the meeting of members under section 31(2)(d) or by the Registrar under this section.

35. A person whose membership is terminated under section 31 or 32 may be re-admitted to membership only by a two-thirds majority vote of members present and voting at a general meeting.

36. A co-operative society that is a member of another cooperative society shall exercise its voting rights in that other cooperative society through one of its members duly appointed in that behalf as a delegate under section 49.

37. (1) Where a co-operative society is a member of another co-operative society, the latter co-operative society shall recognise any individual authorised by a resolution of the directors of the former co-operative society to represent it at meetings of the latter co-operative society.

(2) An individual authorised under subsection (1) may exercise, on behalf of the co-operative society, all the powers of that co-operative society as if it were an individual member.

38. (1) Subject to the bye-laws, members shall vote—

(a) by a show of hands; or

(b) where the majority of the members entitled to vote at a meeting so demands, by secret ballot.

(2) The chairperson of a meeting has the right to vote, and in the event of a tie he or she is entitled to a second or casting vote.

Representatives of member who is not an individual.

Voting procedure.

Voting rights of a member who is not an individual.

Re-admittance.

(3) Subject to this Act and the bye-laws, a majority of the members who are present and cast votes at a meeting of shall decide all questions.

39. General meetings of members shall be held in Dominica or, in the case of co-operative societies of a regional or international nature, within the defined geographical area of the co-operative society's lawful operations—

(a) at the place provided in the bye-laws; or

(b) where the bye-laws contain no provision, at the place determined by the Board.

40. A member shall not exercise the rights of a member unless the member has made payment to the co-operative society in respect of membership or acquired an interest in the co-operative society as specified in the bye-laws of the co-operative society or as prescribed.

41. (1) This section does not apply to a co-operative society if it is taken to be registered under section 255.

(2) Within two months of the date of its registration, a cooperative society shall hold a general meeting at which all members are entitled to be present and to vote.

(3) Notwithstanding subsection (2), where the Board applies to the Registrar, the Registrar may extend the time for holding the general meeting.

(4) The business at the general meeting mentioned in subsection (2) shall include—

(a) the adoption of the bye-laws;

(b) the adoption of forms of share certificates and records of the co-operative society;

First general meeting

Members not to exercise rights until due payment.

Place of meetings.

(c) the authorising of the issue of shares;

(d) the appointment of an auditor to hold office until the next annual general meeting;

(e) the making of banking arrangements; and

(f) the transaction of any other business.

42. (1) A co-operative society shall hold an annual general meeting in each year not later than four months after the end of the financial year of the co-operative society.

(2) Notwithstanding subsection (1), where the Registrar receives a written request from the Board of a co-operative society prior to the expiration of the period of four months referred to in subsection (1), the Registrar may authorise the co-operative society to hold the annual general meeting at any date that it considers appropriate not later than six months after the end of the financial year of the co-operative society.

(3) The bye-laws may provide for holding semi-annual or other periodic meetings.

43. (1) The Board may call a special general meeting of the members of a co-operative society at any time.

(2) Subject to subsection (3), the Board shall call a special general meeting of the members on receipt of a written request, specifying the purpose of the meeting, from such number of members as may be specified in the bye-laws.

(3) The Board shall call the special general meeting mentioned in subsection (2) within twenty days of their receipt of the request and the special meeting shall dispose of the business specified in the request.

(4) The Registrar may call a special general meeting of the co-operative society—

Special general meeting.

Annual general meeting.

(a) for the purpose of reporting to the members the results of any audit, examination or other investigation of the co-operative society's affairs ordered or made by the Registrar, or

(b) where the co-operative society fails to hold an annual general meeting in accordance with section

42(1) or (2), for the purpose of enabling members to secure any information regarding the affairs of the co-operative society that they are entitled to receive under this Act and to deal with any matters affecting the co-operative society.

44. (1) Where—

(a) in the opinion of the Board it is impracticable—

(i) to call a general meeting of members in the manner in which meetings of members may be called; or

(ii) to conduct a general meeting of members in the manner prescribed in this Act or in the bye-laws; or

(b) for any reason, in addition to those described in paragraph (a), the Registrar considers appropriate, the Registrar on its own initiative may, if satisfied that a meeting is warranted in the circumstances, order a general meeting to be called, held and conducted in any manner that the Registrar may direct.

(2) Without restricting the generality of subsection (1), the Registrar may order that the quorum required in this Act or the bye-laws be varied or dispensed with at a general meeting called under this section.

(3) A general meeting called under this section is a valid general meeting.
Meeting called by Registrar.

45. (1) Except where a written statement is submitted by an auditor under section 143—

(a) a resolution in writing signed by the number of members entitled to vote on that resolution at a general meeting of members as may be specified in the bye-laws is as valid as if it had been passed at a general meeting of the members; and

(b) a resolution in writing dealing with any matter required by this Act to be dealt with at a general meeting of members and signed by all the members entitled to vote at that meeting—

(i) satisfies all the requirements of this Act relating to meetings of members; and

(ii) subject to subsection (2), is effective from the date specified in the resolution.

(2) The effective date of a resolution described in subsection (1)(b)(ii) shall not be earlier than the date on which the first member signed the resolution.

(3) A copy of every resolution described in subsection (1) shall be kept with the minutes of the meetings of members.

46. (1) A co-operative society shall give at least ten days notice of any annual meeting or special meeting to its members by—

(a) sending the notice by mail to the members, at the addresses given in the register of members; or

(b) publishing the notice in not less than two issues of a newspaper published and circulated in Dominica, or by posting the notice in a place or through a medium of communication that, as stipulated in the bye-laws and in the opinion of the Board, is prominent and accessible to members.

Notice of meeting.

Resolution in lieu of meeting.

(2) Notwithstanding any other provision of this Act, where a co-operative society is required to send a statement, agreement, proposal or other document to its members with a notice of a meeting and decides to insert the notice of a meeting in a newspaper under paragraph (1)(b), the co-operative society shall—

(a) in the notice, inform the members of the document, giving a description of the document that, in the opinion to the Board, is adequate to describe its nature; and

(b) make a copy of the document available to any member or delegate who requests it.

(3) The notice of any special meeting must specify the purpose for which the meeting is being called.

(4) The proceedings or the business transacted at a general meeting are invalidated by reason only of the non-receipt by a member of notice of the meeting.

47. (1) Subject to subsection (2), for the purpose of determining members—

(a) entitled to receive payment of a bonus or dividend;

(b) entitled to participate in a distribution on liquidation; or

(c) for any purpose in addition to that described in paragraph (a) or (b), except the right to receive notice of or to vote at a general meeting, the Board may fix in advance a date as the record date for the determination of members.

(2) The record date mentioned in subsection (1) shall not precede, by more than 30 days, the particular action to be taken.

Fixing of record date.

(3) Subject to subsection (4), for the purpose of determining members entitled to receive notice of a general meeting, the Board may fix in advance a date as the record date for the determination of members.

(4) The record date mentioned in subsection (3) shall not precede, by more than fifty days or by less than eleven days, the date on which the meeting is to be held.

(5) Where the Board does not fix a record date—

(a) the record date for the determination of members entitled to receive notice of a general meeting is—

(i) the close of business on the day immediately preceding the day on which the notice is given; or

(ii) if no notice is given, the day on which the meeting is held; and

(b) the record date for the determination of members for any purpose other than that described in paragraph (a) shall be at close of business on the day on which the Board passes a resolution relating to that purpose.

48. (1) Subject to subsection (2), the quorum at any annual general or special meeting of members is that specified in the byelaws.

(2) Except where all the members are directors, the number of members present at an annual meeting, general meeting or special meeting shall not be less than the number of directors plus three.

(3) Subject to the bye-laws, where a quorum is present at the opening of a general meeting of members the members present may proceed with the business of the meeting.
Quorum.

(4) Where a quorum is not present sixty minutes after the time fixed for the commencement of a general meeting of members—

(a) the members present may adjourn the meeting to a time and place to be determined by the Board but not later than thirty days after the date of the adjourned meeting and shall not transact any other business or;

(b) the Registrar or the Registrar's representative may direct that the meeting proceeds if the Registrar is satisfied that the meeting was convened in accordance with the Act and that the members present were properly notified and constitute at least seventy five per cent of the amount required for a quorum.

(5) If at the adjourned meeting there is no quorum the members present constitute a quorum and may proceed with the meeting.

49.(l) Where the bye-laws of a co-operative society provide for the nomination and appointment of delegates to a general meeting—

- (a) the delegates shall exercise the powers of membership at any annual or special meeting; and
- (b) any reference in this Act with respect to the exercise of any power mentioned in paragraph (a) shall be construed as a reference to delegates.
- (2) The members who elect delegates may, at a special meeting called for the purpose or at any annual meeting—
 - (a) remove the delegates in the manner provided for in the bye-laws; and Delegates.
 - (b) notwithstanding subsection (1), amend the byelaws to eliminate the nomination and appointment of delegates.

50. (1) A member who is entitled to vote at an annual meeting of members may—

- (a) submit to the co-operative society a notice of motion with respect to any matter that he or she proposes to raise at the meeting; and
- (b) discuss at the meeting any matter with respect to which he or she would have been entitled to submit a notice of motion.

(2) Where a member submits a notice of motion and requests the co-operative society to send the notice of motion with the notice of the meeting at which the motion is to be presented or make the notice of motion available to all members entitled to attend and vote at that meeting, the co-operative society shall comply.

(3) Where a member submits a notice of motion and requests the co-operative society to include in or attach to the notice of motion—

(a) a statement by the member of not more than two hundred words in support of the motion; and

(b) the name and address of the member, the co-operative society shall comply.

(4) A co-operative society is not required to comply with subsections (2) and (3) where—

(a) the notice of motion is not submitted to the cooperative society at least forty-five days before the anniversary date of the previous annual general meeting of members;

Notice of motion.

(b) in the opinion of the directors, the notice of motion is submitted by the member primarily for the purpose of—

(i) enforcing a personal claim or redressing a personal grievance; or

(ii) promoting general economic, political, racial, religious, social or similar causes;

(c) the co-operative society, at the member's request, included a notice of motion in a notice of a meeting of members held within two years preceding the receipt of the notice of motion submitted under subsection (1), and the member failed to present the notice of motion at the meeting;

(d) substantially the same notice of motion was submitted to members in the notice of a meeting of members held within two years preceding the receipt of the members request, and the notice of motion was defeated; or

(e) in the opinion of the Board, the rights conferred by this section are being abused to secure publicity.

(5) A member who requests that a notice of motion and any statement be sent with the notice of the meeting at which the motion is to be presented shall pay the cost of sending the notice of motion and statement, unless the members present at the meeting provide otherwise by a majority vote.

(6) A co-operative society or a person acting on behalf of a co-operative society does not incur any liability by reason only of circulating a notice of motion or statement in compliance with this section.

(7) Where a co-operative society refuses to include a notice of motion in a notice of a meeting, the co-operative society shall, within thirty days after receiving the proposal—

(a) notify the member submitting the notice of motion of its intention to omit the notice of motion from the notice of the meeting; and

(b) send to the member a statement of the reasons for the refusal.

(8) Where a member claiming to be aggrieved by a refusal under subsection (7) applies to the Registrar, the Registrar may suspend the holding of the meeting to which the motion is sought to be presented and give any directions that it may consider appropriate.

(9) A co-operative society or a person claiming to be aggrieved by a notice of motion may apply for permission for the co-operative society to omit the notice of the meeting and, where the Registrar is satisfied that subsection (5) applies, the Registrar may give permission.

(10) In this section “notice of motion” means a notice of motion submitted to a co-operative society under subsection (1)(a).

51. (1) Subject to this Act and the bye-laws, the members of a co-operative society may, at any annual meeting or any special meeting called for the purpose, make, amend, repeal, replace or confirm any bye-laws, where written notice of the proposed making, amendment, repeal, replacement or confirmation—

(a) is forwarded to each member of the co-operative society with the notice of the meeting at which the making, amendment, repeal, replacement or confirmation is to be considered, by a majority of members present and voting at that meeting; or

(b) is not forwarded to each member of the co-

Power to make bye-laws.

operative society with the notice described in paragraph (a), by a three-fourths majority of members present and voting at the meeting.

(2) A member may make a proposal, in the manner provided in section 50, to make, amend, repeal, replace or confirm any bye-law.

52. (1) Bye-laws do not have any force or effect unless three copies of the bye-laws, certified to be true copies by the president and secretary of the co-operative society, are filed with and approved by the Registrar.

(2) Subject to subsection (3), where proposed bye-laws are certified under subsection (1) and receive the members' approval required in section 51(1), the bye-laws shall have immediate force and effect.

(3) Bye-laws described in subsection (2) cease to have any force or effect on the expiration of sixty days after the date of the general meeting in which it is approved by the members, unless, within that sixty day period, the bye-laws are filed with the Registrar under subsection (1).

(4) Where the Registrar approves bye-laws, it shall return to the co-operative society one copy of the bye-laws with the approval of the Registrar stamped on the bye-laws.

PART IV MANAGEMENT

53. (1) A co-operative society shall be managed by a Board of directors which shall be constituted in accordance with this Act and the bye-laws of the co-operative society.

Board of directors.

Effective date of the byelaws.

(2) The Board shall be constituted by not less than five and not more than thirteen directors, as specified in the bye-laws.

(3) The members of a co-operative society may amend the bye-laws to vary the number of directors, but no amendment to decrease the number of directors affects an incumbent director.

(4) A person who—

(a) has been sentenced by a Court in any country for an offence involving fraud or dishonesty and has not received a free pardon for that offence;

(b) has been convicted of an offence under the Money Laundering (Prevention) Act or the Suppression of the Financing of Terrorism Act;

(c) is not in good financial standing with a co-operative society;

(d) has made an arrangement with his or her creditors;

(e) was a director of a failed co-operative society of the same type;

(f) has been convicted on indictment of an offence in connection with the promotion, formation or management of a body corporate;

(g) has been convicted of an offence under this Act;

(h) is of unsound mind and has been so found by a court in Dominica;

(i) is or becomes bankrupt;

(j) is under the age of eighteen years or, in the case of a junior co-operative, under the age of ten years;

(k) has not been a member of the co-operative society or a duly appointed representative of a member cooperative society for the past twelve months;

Act No. 20 of 2000.

Act No. 31 of 2003.

(l) is a member who has not transacted any business with the co-operative society for twelve consecutive months, or who represents a member co-operative society who has not transacted any business with the co-operative society for twelve consecutive months;

(m) is an employee of the co-operative society or of the Registrar, or is a partner or employee of the co-operative society's auditor, or of the apex body;

(n) holds less than the minimum level of equity shares in accordance with section 13(1)(a)(v);

(o) is already part of the management of another cooperative society of the same type;

(p) has been suspended, removed or prohibited from serving as an officer or director of a financial institution, including a credit union by a supervisory

Authority shall not constitute part of the management of a co-operative society, until his or her disability is removed, but he or she retains his or her membership of the co-operative society during the period of such disability.

(5) For the purposes of this Part “management” includes a person who—

(a) holds membership of the Board or any committee established by a co-operative society; and

(b) is employed by the Board.

(6) A person who knowingly holds membership of the Board or of a committee of a co-operative society, or who knowingly seeks employment with, or is employed or continues to be employed by a co-operative society whilst disqualified under this section commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding ten thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both.

54. (1) A co-operative society—

(a) shall have a president, a vice-president, a treasurer and a secretary; and

(b) may have any officers in addition to those mentioned in paragraph (a) that are provided for in the bye-laws.

(2) Subject to the bye-laws—

- (a) the Board may designate the officers of the cooperative society, appoint persons as officers, specify the officers' duties and delegate powers to manage the business and affairs of the cooperative society to them; and
- (b) a director may be appointed as an officer of the co-operative society.
- (3) A person shall not be president, vice-president or treasurer of a co-operative society unless he is a director of the co-operative society.

55. (1) On the registration of a co-operative society, the individuals whose names appear in the application for registration as having been appointed and have consented to act as provisional directors—

- (a) have all the powers and perform the duties of directors; and
- (b) hold office until the first general meeting.

(2) At the first general meeting and at every annual general meeting the directors shall be elected in accordance with this Act, the Regulations made under this Act and the bye-laws. Provisional directors and elected directors.
Officers.

56. Subject to this Act, the Regulations and the bye-laws, the Board shall—

- (a) exercise the powers of the co-operative society directly, or indirectly through the employees and agents of the co-operative society;
- (b) ensure the good governance and direct the management of the business and affairs of the co-operative society; and
- (c) formulate and implement the policies of the cooperative society.

57. (1) The Board may establish committees for the more efficient management of various aspects of the business or affairs of the co-operative society.

(2) A committee established under subsection (1) may consist of members of the Board and other members of the cooperative society.

(3) No committee may—

- (a) fill vacancy among the directors;
- (b) declare a bonus or a dividend;
- (c) approve any financial statement of the cooperative society;
- (d) submit to the members any question or matter requiring the approval of members; or
- (e) make decisions where this Act or the bye-laws require a two-thirds majority or a unanimous vote of the Board.

58. (1) Committees appointed under section 57(1) hold office for a period not exceeding one year.

Tenure of committees generally.

Committees generally.

Powers of Board.

(2) A committee member appointed under section 57(1) may be removed by resolution of the co-operative society or of the Board.

(3) The removal of a committee member who is a director does not affect his or her office as a director.

(4) A committee shall—

- (a) fix its quorum at not less than a majority of its members;
- (b) keep minutes of its proceedings; and

(c) submit to the Board at each meeting of the Board and to the annual general meeting of the cooperative society the minutes of the committee's proceedings since the most recent meeting of the Board or of the co-operative society.

59. (1) A credit union, central credit union and central cooperative society shall have a credit committee which shall be elected by its members at the annual general meeting.

(2) A person shall not be elected to the credit committee if the person is not present at the meeting at which the election is held, unless the person tenders an excuse for his or her absence which is accepted by the majority of the members present.

(3) Subject to section 73(3), the members of the credit committee shall hold office for such term as the bye-laws provide and until their successors are elected.

(4) The credit committee shall consist of such number of members as may be fixed by the bye-laws, which shall be not less than three.

(5) A person does not qualify to be a member of the credit committee if that person is a member of the Board or of the Credit committee, supervisory and compliance committee or is an employee of the credit union, central credit union or central cooperative society; or has a delinquent loan with the credit union, central credit union or central co-operative society.

(6) A majority of members of the credit committee constitutes a quorum.

(7) The election of members of the credit committee shall proceed in keeping with subsections (a) to (d) of section 72 (1).

(8) Where a vacancy occurs in the credit committee, the Board may fill the vacancy until the next annual meeting of the credit union, central credit union or central co-operative society.

(9) The bye-laws of the a credit union, central credit union or central co-operative society may provide for the election and retirement of members of the credit committee in rotation so that no member of the credit committee shall be elected for a term of more than three years but no person may serve as a member of the credit committee of a co-operative society for more than

two consecutive terms or an aggregate of six successive years.

60. The credit committee shall—

(a) implement and ensure implementation of the approved loan policy;

(b) provide prudent oversight of the loans portfolio;

(c) make recommendations to the Board in respect of the loan policy of the credit union; and

(d) perform such duties as may be prescribed under this Act, the Regulations and the bye-laws of the credit union.

Duties of credit committee.

61. (1) The Board shall determine the terms and conditions under which the credit committee shall approve loans to members.

(2) The credit committee may, upon such terms and conditions as the Board may specify, authorise the manager, loans manager or other employees of the credit union to approve loans to members.

(3) A person authorised by the Board to approve loans under subsection (1) or (2) shall submit a written monthly report to the credit committee stating the number of loan applications received, the number of loans granted, the security, if any, obtained for such loans and any risks associated with those loans.

(4) The responsibilities and duties of any person authorised to approve loans under subsection (2) are concurrent with the responsibilities and duties of the credit committee.

62. (1) The credit committee shall—

(a) meet at least once every month;

(b) keep minutes of its meetings;

(c) submit a monthly report to the Board stating—

(i) the number and category of loan applications;

(ii) the number and category of loans granted;

(iii) the security taken and risks for loans granted;

and

(iv) applications denied, delinquent loans, classified loans, loans written off, watch listed accounts, large credit exposures and related party loans; and

(d) submit an annual report on the matters referred to in paragraph (c), and on the loan portfolio quality and trends, to the annual meeting of the credit union.

Credit committee reports.

Approval of loans.

(2) The members of a credit union may, by special resolution in a special meeting called for the purpose, remove a credit committee which fails to comply with subsection (1)(c).

63. (1) The members of a credit union may, by resolution passed by two-thirds of the votes cast at a general meeting called for the purpose, remove a member of a credit committee before the expiration of his or her term of office, and shall at that meeting elect another member in place of the first mentioned member for the unexpired portion of his or her term.

(2) The notice calling the meeting of members referred to in subsection (1) shall specify that the purpose of the meeting is to remove the member of the credit committee who is named in the notice.

(3) A member of a credit committee removed under this section has the right to make such representations at the general meeting to the members of the credit union regarding the resolution for his or her removal as he or she may think fit, and may be represented at the general meeting by an attorney-at-law or an agent.

64. Where a member of a credit committee fails to attend three consecutive meetings without, in the opinion of the Board, reasonable cause or fails to perform any of the duties allotted to the member as a member of the credit committee, the member's position on the credit committee may be declared vacant by the Board who may then appoint a qualified person to fill the vacancy until the next annual general meeting of the credit union.

65. (1) A co-operative society shall have a supervisory and compliance committee who shall be elected by its members at the annual general meeting.

(2) A person shall not be elected to a supervisory and compliance committee if that person is not present at the meeting

Removal of credit committee by Board.

Supervisory and compliance committee.

Removal of members of credit committee by members.

at which the election is held, unless he or she tenders an excuse for his or her absence which is accepted by the majority of the members present.

(3) Subject to section 73(3), the members of a supervisory and compliance committee hold office for such term as the byelaws provide until such time that their successors are elected whichever is later.

(4) The supervisory and compliance committee shall consist of the number of members specified in the byelaws, which shall be not fewer than three.

(5) A person who is a member of the Board or the credit committee or who is an employee of the co-operative society shall not be a member of the supervisory and compliance committee.

(6) A majority of members of the supervisory and compliance committee constitutes a quorum.

(7) The election of members of the supervisory and compliance committee shall proceed in keeping with subsections (a) to (d) of section 72 (1).

(8) Where a vacancy occurs in the supervisory and compliance committee, the supervisory and compliance committee may fill such vacancy until the next annual meeting of the cooperative society.

(9) The bye-laws of a co-operative society may provide for the election and retirement of members of the supervisory and compliance committee in rotation, except that a member of the supervisory and compliance committee shall not-

(a) be elected for a term exceeding three years; or

(b) serve more than six successive years but shall become eligible for re-election after the expiration of one year.

66. (1) The supervisory and compliance committee shall—

(a) keep minutes of its meetings;

(b) make or cause to be made not less than twice in the period before the next annual general meeting of the co-operative society, an examination of the books and documents of the co-operative society which shall include an inspection of the securities, cash accounts and all records relating to loans, purchases and sales;

(c) make or cause to be made, once in the period before the next annual general meeting, a comparison between the pass-book or statement of account of a random sample of at least 10% of all the members of the co-operative society and the appropriate records of the co-operative society;

(d) ascertain that all actions and decisions of the Board, committees, management and staff relating to the affairs of the co-operative society are in accordance with this Act, the Regulations, the bye-laws and the approved standards and policies of the co-operative society;

(e) submit a written report on the results of its examinations and enquiries under this section to the Board and the management of the co-operative society within seven days of each meeting of the supervisory and compliance committee; and

(f) submit a written report on the result of its examinations and enquiries under this section to the next annual general meeting or, if it thinks fit, to a special general meeting of the co-operative society.

(2) The supervisory and compliance committee shall have access, at all times, to the books and documents of the co-operative society.

Duties, functions, and powers of supervisory and compliance committee.

(3) Members of the supervisory and compliance committee may attend meetings of the Board and all other committees of the co-operative society as observers.

67. (1) The Board shall appoint a senior qualified professional to monitor and periodically report to the supervisory and compliance committee and the Board on the levels of awareness, adherence and compliance in the internal operations of the society.

(2) A compliance officer appointed under subsection (1) shall track gaps and improvements in compliance with the Act, other applicable legislation, standards and best

practices in keeping with legislation and guidelines in force for relating to anti-money laundering and combating terrorist financing.

68. (1) When the supervisory and compliance committee is of the opinion that the funds, securities or other property of the cooperative society have been misappropriated or misdirected, or that the bye-laws of the co-operative society, this Act or the Regulations have been contravened, by the Board or a director, the credit committee or a member of the credit committee or by an officer or employee engaged by the Board, the supervisory and compliance committee shall immediately inform the Board and the Registrar in writing.

(2) The supervisory and compliance committee shall with the approval of the Board appoint an auditor or some other body to undertake a review to investigate or assist in determining whether any of the funds, securities or other property of the cooperative society have been misappropriated or misdirected and the remuneration of any auditor or other body to be appointed shall be determined by the supervisory and compliance committee and paid by the co-operative society.

(3) In the event of a misappropriation or misdirection or contravention, or a suspected misappropriation or misdirection or contravention, pending the outcome of the investigation or review Misappropriation and other contraventions of the Act.

Compliance officer. referred to in subsection (2), the supervisory and compliance committee may suspend any member of the Board or member of the credit committee after having given the member an opportunity to be heard by the supervisory and compliance committee.

(4) On the completion of the investigation or review referred to in subsection (2), if the supervisory and compliance committee considers that the Board, a director, the credit committee or an officer or employee engaged by the Board has taken any action or decision which is not in accordance with this Act, the Regulations or the bye-laws, then, after consultation with the Registrar, the supervisory and compliance committee may—

(a) suspend the officer by a unanimous vote of all the members of the supervisory and compliance committee taken at a meeting of the supervisory and compliance committee called for the purpose of considering the officer's suspension; and

(b) convene a special general meeting of the cooperative society to consider whether to remove the officer in light of the action or decision taken by the officer.

(5) Where the Board or a Board member, the credit committee or a member of that committee or an officer or employee engaged by the Board has been suspended by the supervisory and compliance committee in accordance with subsection (4), the committee shall convene for a date not more than twenty-one days after the suspension, a special general meeting of the society—

(a) for the purpose of reviewing the suspension; and

(b) to consider whether to remove the officer in the light of the action or decision taken by the officer.

(6) Without prejudice to the requirements of section 46, not less than ten days before the date of a meeting of the supervisory and compliance committee called as mentioned in subsection (4) or the date of a special general meeting of the cooperative society convened as mentioned in subsection (4) or (5), the supervisory and compliance committee shall give written notice of the meeting to the Registrar and to the officer concerned.

(7) At a special general meeting of a co-operative society held under this section, the members of the co-operative society, according to the purpose or purposes for which the meeting was convened, may, by secret ballot—

- (a) ratify the suspension of the officer concerned and remove the officer from office; or
 - (b) rescind the suspension of the officer, but an officer shall not be removed from office without being given an opportunity to be heard by the members present at the meeting.
- (8) Where an officer of a co-operative society is removed from office at a special general meeting under subsection (7), the vacancy caused by the removal shall be filled in such manner as may be determined by the meeting.

69. The supervisory and compliance committee shall meet at least once every month and shall meet the Board at least four times in every year to review the Board's performance of its functions.

70. When a member of the supervisory and compliance committee fails to attend three consecutive meetings of the supervisory and compliance committee without, in the opinion of the supervisory and compliance committee, reasonable cause, or fails to perform any of the duties allotted to the supervisory committee and compliance as a member of the supervisory and compliance committee, the member's position on the supervisory and compliance committee may be declared vacant by the remaining members of the supervisory and compliance committee Meetings of the supervisory and compliance committee.

Removal of member of supervisory and compliance committee by the committee.
who may appoint a qualified person to fill the vacancy until the next annual general meeting of the co-operative society.

71. (1) The members of a co-operative society may, by resolution passed by two-thirds of the votes cast at a general meeting duly called for that purpose, remove a member of a supervisory and compliance committee before the expiration of his or her term of office, and shall by vote cast at the meeting elect another member in his or her stead for the unexpired portion of his or her term.

(2) The notice calling the meeting of members referred to in subsection (1) shall state that the purpose of the meeting is to remove the member of the supervisory and compliance committee who is named in the notice.

(3) A member of the supervisory and compliance committee removed under this section has the right to make such representations to the members at a general meeting regarding the resolution for his or her removal as he or she may think fit, and may be represented at the general meeting by an attorney-at-law or an agent.

72. (1) Subject to section 73 and to the Regulations—

- (a) the election of directors shall take place annually at the annual general meeting;
 - (b) the directors hold office until the conclusion of the meeting at which their successors are elected, and are eligible for re-election;
 - (c) where the number of nominees exceeds the number of directors to be elected, the election of directors may be by secret ballot;
 - (d) every member has the right to vote for the number of directors to be elected and any voting sheet that contains the names of more than the number to be elected is void;
- Election of directors.

Removal of members of supervisory and compliance committee by members.

(e) where there are vacancies on the Board but the remaining directors constitute a quorum, they shall call a special meeting of the Board for the purpose of appointing members to fill any such vacancy until the next annual general meeting; and

(f) where there is a vacancy on the Board and there is not a quorum of directors, the remaining directors shall call a special meeting of the co-operative society for the purpose of electing members to fill any vacancy.

(2) Where an election of directors required by this Act, the Regulations or the bye-laws does not take place at the proper time, the directors then in office shall continue in office until their successors are elected.

(3) Subject to sections 217(1) and 221, not more than one-third of the directors may be employees of a co-operative society.

(4) Unless a reasonable excuse is received in writing by the meeting, a person shall not be elected as a director if the person is not present at the meeting at which the election is being conducted.

(5) Subject to section 53(2), the Board shall consist of such numbers as may be fixed by the bye-laws.

73. (1) Subject to subsection (3) the directors of a cooperative society shall be elected for a term of three years.

(2) A person shall not serve as a director of a cooperative society for more than six consecutive years but thereafter the person will become eligible for re-election after the expiration of one year out of office.

Tenure of directors and committee members.

(3) After the commencement of this Act, on the formation of each new society, or on the re-constitution of a previously registered co-operative society, at the next annual general meeting of members the election of the Board, the supervisory and compliance committee and the credit committee shall be on a rotational basis as follows:

(a) at least one-third shall be elected to serve for one year;

(b) at least one-third shall be elected to serve for two years; and

(c) the remainder shall be elected to serve for three years, and thereafter each elected member of the Board, the supervisory and compliance committee and the credit committee shall serve for a term of three years.

74. (1) Subject to the bye-laws and the Regulations, the Board may without authorisation of the members of a co-operative society—

(a) borrow money on the credit of the co-operative society;

(b) issue, re-issue, sell or pledge debt obligations of the co-operative society;

(c) give a guarantee on behalf of the co-operative society to secure performance of an obligation of any person; and

(d) mortgage, charge, hypothecate, pledge or otherwise create a security interest in all or any property of the co-operative society, owned or subsequently acquired, to secure any debt obligation of the co-operative society.

Additional powers of the Board.

(2) A sale, lease, exchange of all or substantially all of the property of a co-operative society, other than in the ordinary course of business of the co-operative society, shall be approved by the members in a manner provided in subsection (3) to (7).

(3) The Board shall send in the manner provided in section 46, a notice of a special meeting to consider the sale, lease or exchange mentioned in subsection (2) to each member.

(4) The notice mentioned in subsection (3) shall be accompanied by a copy or summary of the agreement of sale, lease, or exchange mentioned in subsection (2).

- (5) At a special meeting held under this section, the members may by special resolution—
(a) authorise the sale, lease or exchange mentioned in subsection (2); and
(b) agree to or authorise the directors to agree to any terms and conditions of sale, lease or exchange.
- (6) Each member of the co-operative society has the right to vote with respect to a sale, lease or exchange mentioned in subsection (2).
- (7) A sale, lease or exchange mentioned in subsection (2) is adopted when the members of the co-operative society have approved the sale, lease or exchange by a special resolution.

75. The act of a director or officer is valid notwithstanding an irregularity in his or her election or a defect in his or her appointment or qualification.

76. (1) Subject to subsections (2) and (3), a co-operative society may indemnify—

(a) a director or officer of the co-operative society;

Validity of acts of directors and officers.

Indemnification of directors and officers.

(b) a former director or officer of the co-operative society; and

(c) a person who acts or has acted at the request of the co-operative society as a director or officer of a body corporate of which the co-operative society is or was a member or a creditor, against costs, charges and expenses, including an amount paid to settle an action or satisfy a judgment, reasonably incurred by that person with respect to a civil, criminal or administrative action or proceeding to which that person is made a party by reason of the person being or having been a director or officer of the cooperative society or the body corporate.

(2) A co-operative society may indemnify a director, officer, or other person referred to in subsection (1) only where that person—

(a) acted honestly and in good faith with a view to the best interest of the co-operative society; and

(b) in the case of a criminal, civil or administrative action or proceeding that is enforced by a monetary penalty, had reasonable grounds for believing that the conduct was lawful.

(3) A co-operative society shall not indemnify a director, officer or other person referred to in subsection (1) with respect to an action by or on behalf of the co-operative society to obtain a judgment in its favour to which the person is made a party by reason of the person being or having been a director or an officer of the co-operative society, against costs, charges and expenses reasonably incurred by the person in connection with the action unless—

(a) the co-operative society has the approval of the court; and

(b) the person fulfils the conditions described in subsection (2).

(4) Notwithstanding subsections (1) to (3), a co-operative society shall indemnify a director, officer or other person referred to in subsection (1) who has been substantially successful in the defence of a civil, criminal or administrative action or proceeding to which the person is made a party by reason of the person being or have been a director or officer of the co-operative society or body corporate against costs, charges and expenses reasonably incurred by the person with respect to the action or proceedings.

(5) A co-operative society or a director, officer or other person referred to in subsection (1) may apply to the court for an order approving the indemnity and the court may make the order.

(6) On an application under subsection (5), the court may order notice to be given to an interested person, and that interested person is entitled to appear and be heard in person or by an attorney-at-law.

77. Every director and officer of a co-operative society in exercising his or her powers and discharging his or her duties shall—

- (a) act honestly and in good faith with a view to the best interests of the co-operative society; and
- (b) exercise the care, diligence and skill that a reasonably prudent person would exercise in comparable circumstances, and shall be liable to make good any loss or damage suffered by the co-operative society as a direct or indirect result of a contravention of this section.

78. The provisions of a contract, the bye-laws or the circumstances of his or her appointment do not relieve a director from— Duty of care of directors and officers Ambit of duty.

- (a) the duty to act in accordance with this Act and the Regulations; or
- (b) liability that by virtue of a rule of law would otherwise attach to him or her with respect to negligence, default, breach of duty or breach of trust of which he or she may be guilty in relation to the co-operative society.

79. (1) Where directors vote for, or consent to, a resolution authorising, or approve by any other means—

- (a) the purchase of shares of another co-operative society contrary to section 100;
- (b) the payment of a dividend on shares contrary to section 129;
- (c) the payment of a bonus contrary to section 129;
- (d) a loan or guarantee or the giving of financial assistance contrary to section 121;
- (e) a payment of an indemnity described in section 76 to a director or a former director, without the approval of the court required by section 76(3); or
- (f) an act not consistent with the purpose of the cooperative society as set out in its bye-laws and with respect to which the co-operative society has paid compensation to a person, they are jointly and severally liable to make good any loss or damage suffered by the cooperative society.

(2) On the application of a director, the court may declare whether or not, having regard to any circumstances the court may consider appropriate—

- (a) the co-operative society is insolvent; or
- (b) the payment of a bonus or dividend or the lending

Liability of directors. of money would make the co-operative society insolvent.

(3) The liability imposed by subsection (1) is in addition to and not in derogation from a liability imposed on a director by any other enactment or law.

(4) Subject to subsection (5), for the purpose of this section, a director who is present at a meeting of directors or of a committee is deemed to have cast a vote in favour of a resolution or of granting the approval mentioned in subsection (1), unless—

- (a) the director's dissent is entered in the minutes of the meeting; or
- (b) the director's written dissent is—
 - (i) delivered to the secretary of the meeting before its adjournment; or
 - (ii) delivered or sent by registered mail to the registered office of the co-operative society immediately after the adjournment of the meeting.

(5) A director who votes for or consents to a resolution mentioned in subsection (1) is not entitled to dissent under subsection (4).

(6) Where a director is not present at a meeting of directors or of a committee at which a vote, resolution or approval mentioned in subsection (1) is cast or given, the director shall be taken to have cast an affirmative vote, consented to the resolution or given approval, unless, within fourteen days after becoming aware of the proceedings, the director delivers or sends by registered mail his or her written dissent to the registered office of the co-operative society.

(7) On receipt of a written dissent, the secretary of the co-operative society shall 2011

(a) certify on the written dissent the date, time and place it is received; and

(b) keep the written dissent in the minutes of the meeting at which the resolution was passed.

(8) An action to enforce a liability imposed in subsection (1) shall not be commenced after two years from the date of the meeting at which the vote, resolution or approval was taken or given.

(9) In an action to enforce a liability imposed in subsection (1), the Court may, on the application of the co-operative society or a defendant—

(a) join as a defendant a person who received a benefit as a result of the resolution complained of; and

(b) make the person mentioned in paragraph (a) liable to the co-operative society jointly and severally with the directors to the extent of the amount paid to the person.

(10) A director is not liable under subsection (1) where the director—

(a) proves that he or she did not know or could not reasonably have known that the act authorised by the resolution was contrary to this Act;

(b) relies and acts in good faith—

(i) on statements of facts represented to him or her by an officer of the co-operative society to be correct; or

(ii) on statements contained in a written report or opinion of the auditor of the co-operative society or a professional person engaged by the co-operative society who is competent to give advice in respect to the matter.

(11) A director who is found liable under subsection (1) is entitled to apply to a court for an order compelling a member or other recipient to pay or deliver to the director any money or property that was paid or distributed to the member, or other recipient contrary to section 100, 121 or 129.

(12) In connection with an application under subsection

(11) and where the court is satisfied that it is equitable to do so, it may—

(a) order a member or other recipient to pay or deliver to a director any money or property that was paid or distributed to the member or other recipient contrary to section 100, 121 or 129; or

(b) make an order, other than that described in paragraph (a), that it considers appropriate.

80. (1) A director, officer, committee member or employee or an associate of a director, officer, committee member or employee, who, in connection with a transaction relating to shares of a co-operative society or a debt obligation of a co-operative society, makes use of confidential information for the benefit or advantage of himself or herself or an associate that, if generally known, might reasonably be expected to affect materially the value of the share or the debt obligation—

(a) is liable to compensate any person for a direct loss suffered by the person as a result of the transaction, unless the information was known or reasonably should have been known to the person at the time of the transaction; and

(b) is accountable to the co-operative society for any direct benefit or advantage received or receivable

Misuse of confidential information.

by him or her or his or her associate as a result of the transaction.

(2) Subject to subsection (3), a person who has acquired confidential information concerning a co-operative society or a member of a co-operative society—

(a) as a director, committee member, officer, employee or auditor of the co-operative society;

(b) as a liquidator, receiver or manager, of the cooperative society; or

(c) as a Registrar, an officer or staff referred to in section 5 shall not disclose that information except as permitted under subsection (3), or use that information for any personal benefit not related to the duties through which the information was acquired.

(3) Subsection (2) does not apply to the giving of confidential information—

(a) where the information is given in the course of that person's duty;

(b) where the information is a general credit rating of a person that is supplied by a director or employee of the co-operative society following a bona fide business request;

(c) where the information relates to a member of a co-operative society and is given with the written authorisation of that member or his or her legal representative;

(d) where the information relates to a co-operative society and is given with the written authorisation of the co-operative society or its legal representative; or (e) where the information is required to be disclosed

by law or by an order of the Court.

(4) A person who contravenes subsection (2) commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding ten thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both.

81. (1) A director, committee member or employee of a cooperative society who—

(a) is a party to a material contract or proposed material contract with the co-operative society; or

(b) is a director, committee member or employee of, or has a material interest in, a person who is party to a material contract or proposed material contract with the co-operative society, shall disclose in writing to the co-operative society the nature and extent of his or her interest.

(2) The disclosure required by subsection (1) shall be made—

(a) immediately after the director, committee member or employee becomes aware that the contract or proposed contract is to be considered or has been considered at a meeting of the Board;

(b) if the director, committee member or employee becomes interested after a contract is made, immediately after he or she becomes so interested; or

(c) where the director, committee member or employee has an interest in a contract before assuming office, immediately after he or she

Declaration of interests.

becomes a director, committee member or employee.

(3) For the purposes of this section, a general notice to the directors by a director, committee member or employee of a cooperative society declaring that he or she is to be regarded as interested in any contract made with that person is a sufficient declaration of interest in relation to any contract made with that person.

82. (1) If a director, committee member or employee of a cooperative society has any pecuniary interest, direct or indirect, in any contract, proposed contract or other matter and is present at a meeting of the co-operative society, Board or committee at which the contract, proposed contract or other matter is the subject of consideration, he or she shall at the meeting and as soon as practicable after its commencement disclose the fact and shall not take part in the consideration or discussion of the contract, proposed contract or other matter or vote on any question with respect to it and shall be excluded from the meeting for the duration of the consideration, discussion and voting procedure.

(2) A person who fails to comply with subsection (1) commits an offence and is liable—

(a) on summary conviction to a fine not exceeding twenty thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding 2 years, or to both; or

(b) on conviction on indictment to a fine not exceeding fifty thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding 2 years, or to both, unless the person proves that he or she did not know that the contract, proposed contract or other matter in which he or she had a pecuniary interest was the subject of consideration at that meeting.

Disclosure of interests at meetings.

(3) A disclosure under subsection (1) shall be recorded in the minutes of the meeting of the co-operative society, Board or committee.

(4) An act or proceeding of the co-operative society, Board or committee shall not be questioned on the ground that a director, committee member or employee has contravened this section.

(5) Where a director, committee member or employee of a co-operative society is not entitled to vote at a meeting under subsection (1) and his or her presence is required to constitute a quorum at the meeting, a decision of the co-operative society, Board or committee is to be taken not to be invalid only by reason of the absence of the director, committee member or employee.

(6) Where a director, committee member or employee of a co-operative society fails to disclose his or her interest in a contract, proposed contract or other matter in accordance with this section, a court may, on the application of a co-operative society or a member of the co-operative society, set aside the contract or other matter on any terms that the court considers appropriate.

83. (1) For the purposes of section 82, a director, committee member or employee shall be treated, subject to the following provisions of this section and to section 84, as having indirectly a pecuniary interest in a contract, proposed contract or other matter if—

(a) he or she or his or her nominee is a member of a company or other body with which the contract was made or is proposed to be made or which has a direct pecuniary interest in the licence or other matter under consideration; or

(b) he or she is a partner, or is in the employment of a person with whom the contract was made or is Pecuniary interests for the purposes of section proposed to be made, or who has a direct pecuniary interest in the licence or other matter under consideration; or

(c) he or she or his or her partner is a professional adviser to a person who has a direct or indirect pecuniary interest in a contract, proposed contract or other matter.

(2) Subsection (1) does not apply to membership of or employment under any public body.

(3) In the case of married persons the interest of one spouse is deemed for the purpose of section 82 to be also the interest of the other.

84. (1) Section 82 does not apply to an interest in a contract, proposed contract or other matter which a director, committee member or employee of a co-operative society has as

a member of the public or to an interest in any matter relating to the terms on which the right to participate in any service is offered to the public.

(2) Where a director committee member or employee of a co-operative society has an indirect pecuniary interest in a contract, proposed contract or other matter by reason only of a beneficial interest in securities of a company or other body, and the nominal value of those securities does not exceed five thousand dollars or one-thousandth of the total nominal value of

the issued share capital of the company or other body, whichever is the less, and if the share capital is of more than one class, the total nominal value of shares of any one class in which he or she has a beneficial interest does not exceed one-thousandth of the total issued share capital of that class, section 82 does not prohibit him or her from taking part in the consideration or discussion of the contract, proposed contract or other matter or from voting on any question with respect to it, without prejudice, however, to his or her duty to disclose his or her interest.

Removal of exclusion of disability.

85. (1) Subject to the bye-laws, the directors may meet at any place, and on any notice that they consider appropriate.

(2) The president—

(a) may call a meeting of directors at any time; and

(b) on the written request of at least two directors, shall call a meeting within fourteen days of the receipt of the request.

(3) A majority of the directors constitutes a quorum at any meeting of directors.

(4) Subject to the bye-laws, a notice of a meeting of directors may specify the purpose of or other business to be transacted at the meeting.

(5) For the purpose of subsection (4), attendance of a director at a meeting of directors is deemed to be a waiver of notice of the meeting, unless the director attends the meeting for the express purpose of objecting to the transaction of any business on the ground that the meeting is not lawfully called.

(6) Where the time and place of an adjourned meeting is announced at the original meeting, notice of an adjourned meeting of directors is not required to be given to the directors present at that meeting, but shall be given to any directors not so present.

86. (1) Subject to the bye-laws, where all the directors consent, a meeting of directors or of a committee may be held by means of—

(a) a telephone system; and

(b) a communication facility other than a telephone, that permits all persons participating in the meeting to hear and speak to each other, and a person so participating is deemed to be present at that meeting.

Meetings by telephone.

Meetings of directors generally.

(2) Unless this Act, the Regulations or the bye-laws require a meeting, a resolution of the directors may be passed without a meeting where—

(a) all the directors consent to the resolution in writing; and

(b) the consent is filed with the minutes of the proceedings of the directors.

87. (1) A director of a co-operative society is entitled to receive notice of and to attend and be heard at every general meeting of members.

(2) Where a director—

(a) resigns;

(b) receives a notice or otherwise learns of a meeting of members called for the purpose of removing him or her from office; or

(c) receives a notice or otherwise learns of a meeting of directors or members at which another person is to be appointed or elected to fill his or her office, whether because of the director's resignation or removal or because his or her term of office has expired or is about to expire, the director is entitled to submit to the co-operative society a written statement giving the reason for his or her resignation or the reasons he or she opposes any proposed action or resolution.

(3) A co-operative society shall immediately send a copy of the statement mentioned in subsection (2) to the Registrar and shall make available a copy of the statement to every member.

(4) A co-operative society or person acting on its behalf shall not incur any liability by reason only of circulating a director's statement sent in compliance with subsection (3).

Attendance at meetings.

88. (1) The directors shall hold a meeting within ten days after the issue of the co-operative society's certificate of registration.

(2) The directors may, at the meeting mentioned in subsection (1)—

(a) pass resolutions establishing policies of the cooperative society;

(b) adopt forms of corporate records;

(c) appoint officers;

(d) authorise the issue of securities;

(e) appoint an auditor to hold office until the first general meeting of the members;

(f) make banking or other financial arrangements;

(g) appoint authorised signing officers;

(h) adopt operating policies; and

(i) transact any other business.

(3) A director may call the meeting of directors mentioned in subsection (1) by giving not less than five days' notice of the meeting to each director, stating the time and place of the meeting.

(4) The notice mentioned in subsection (3) may be waived where all directors are in attendance at that meeting of directors.

89. (1) A director ceases to hold office when he or she—

(a) resigns;

(b) dies;

(c) fails to attend three consecutive meetings without an accepted excuse;

Director ceasing to hold office.

Organisational meeting of directors.

(d) fails to perform any duties allotted to him or her as a member of the Board;

(e) is removed in accordance with section 90; or

(f) is no longer qualified in accordance with this Act.

(2) A resignation of a director becomes effective—

(a) with immediate effect where that person indicates to the members present at an annual general meeting that he or she is resigning;

(b) at the time specified in a written resignation; or

(c) where no time is specified in a written resignation, at the time the resignation is received by the cooperative society.

90. (1) Subject to the Regulations and the bye-laws, the members of a co-operative society may, by special resolution, remove any director from office.

(2) A vacancy created by the removal of a director may be filled at the meeting of the members at which the director is removed or where not so filled, may be filled under section 72(1)(e).

91. Within thirty days after a change is made in its directors, a co-operative society shall send to the Registrar a notice in the prescribed form setting out the change and the Registrar shall file the notice.

92. A co-operative society may by resolution passed by a majority of the members at an annual or special meeting require all directors and officers to sign annually or at any other time that may be specified in the resolution a declaration relating to—

(a) faithful performance of duties;

Removal of Directors.

Notice of change of directors.

Declaration by directors and officers.

(b) secrecy of transactions with members; and

(c) faithful and loyal support of the co-operative society.

93. The directors shall require that every person appointed to an office that receives, manages or handles goods, merchandise or money on behalf of the co-operative society shall give to the directors, before entering on his or her duties as an officer, security or a bond in such amount as they may require.

94. (1) A co-operative society shall not pay any remuneration directly or indirectly to a director or committee member in connection with his or her duties or for any service performed by that person in that capacity.

(2) Nothing in subsection (1) shall be regarded as prohibiting the reimbursement of expenses—

(a) which are necessarily incurred by a director or committee member in the course of performing any service on behalf, or for the benefit, of the cooperative society; and

(b) which are approved by a majority of the directors voting at a meeting of the Board.

(3) Nothing in subsection (1) shall be regarded as prohibiting any director or committee member of a co-operative society, acting not as a director or committee member but in his or her professional capacity, from tendering for the supply of, and if successful being paid for supplying, goods or services to the cooperative society.

(4) The directors may be granted such honorarium as—

(a) may from time to time be approved prior to its payment, or the payment of any part thereof, by the members in general meeting; and

Remuneration of directors. Bonding.

(b) does not exceed an amount recommended by the Board and approved by a general meeting of the members.

(5) A co-operative society may purchase and maintain insurance for the benefit of a director, member of a committee, officer or employee against a liability, loss and damage incurred by that person while serving the co-operative society as a director, officer, committee member or employee.

95. Subject to section 94 and the bye-laws, the directors shall fix the salary of any employees appointed by the directors and shall approve a scale of remuneration for all employees of a cooperative society.

PART V FINANCING

96. (1) A co-operative society may sell equity shares to its members only, but these shares shall be non-withdrawable but redeemable in accordance with the Regulations and the shares shall have a par value fixed by the bye-laws.

(2) Unless a co-operative society is required by this Act or any other enactment to limit its number of shares it shall have an unlimited number of shares.

(3) A share in a co-operative society is personal property and a shareholder is entitled to an annual statement showing the number of shares that he or she owns.

97. (1) A co-operative society shall express its share capital in its bye-laws as—

(a) an amount of money divided into a specified number of shares set out in the bye-laws; or Shares.

Share capital.

Remuneration of officers and employees

(b) an amount comprising an unlimited number of shares with a specified par value.

(2) A co-operative society shall issue qualifying shares as well as equity shares, provided that the value of the qualifying shares and equity shares owned by the members shall not fall below the equivalent of ten per cent of the asset worth of the cooperative society as a result of any redemption of shares.

(3) The Registrar shall grant such period of time, not exceeding three years from the commencement of this Act, as the Registrar considers reasonable to enable an existing society to make good any deficiency in the adequacy of its capital base.

98. (1) Subject to subsection (2), a co-operative society may issue shares at any time and for any consideration that the directors consider appropriate.

(2) Subject to the bye-laws, a co-operative society shall sell its shares at their par value.

(3) A member shall not be liable to the co-operative society or its creditors beyond the sum remaining unpaid on the member's subscription for shares.

(4) A co-operative society shall not issue a share until it is fully paid—

(a) in money; or

(b) in property that, in the opinion of the directors, is the fair equivalent of the money that the cooperative society would have received if the share had been issued for money.

(5) For the purposes of subsection (4)(b), when determining whether property is the fair equivalent of a money consideration, the directors may take into account reasonable charges and expenses of organisation and reorganisation and Issue of shares. payment for property reasonably expected to benefit the cooperative society.

(6) For the purposes of this section "property" does not include a promissory note or a promise to pay.

99. (1) Subject to the approval of the Registrar a co-operative society may, by special resolution, increase or decrease its sharecapital and, for that purpose, may—

(a) subdivide any shares;

(b) consolidate shares into shares of a larger par value, but the par value of consolidated shares shall not be greater than one hundred dollars;

(c) cancel any shares that, at the date of registration of the bye-laws, have not been subscribed for or agreed to be issued and diminish the amount of its share capital by the amount of the par value of the shares so cancelled;

(d) extinguish or reduce the liability on any of its shares with respect to share capital not paid up;

(e) with or without extinguishing or reducing liability on any of its shares, cancel any paid up share capital that is lost or unrepresented by available assets; and

(f) with or without extinguishing or reducing liability on any of its shares and either with or without reducing the number of such shares, pay off and paid-up share capital that is greater than the requirements of the co-operative society.

(2) The Registrar may give his or her approval under subsection (1) where the Registrar is satisfied that—

(a) the resolution will not contravene this Act;

Alteration of authorised capital.

(b) the holders of all shares of the co-operative society affected by the proposed resolution have approved the special resolution passed by the members at a general meeting called for the purpose; and

(c) in the case of a special resolution providing for a reduction in the share capital of the co-operative society—

(i) all creditors who are liable to be affected have been notified of the resolution and have signified their approval; or

(ii) appropriate steps have been taken by the cooperative society adequately to safeguard the interests of its creditors.

100. Subject to the approval of the Registrar, only a registered co-operative society may purchase more than one-fifth of the shares of another co-operative society where—

(a) that other co-operative society is insolvent;

(b) the proposed purchase or acquisition would not render the purchasing co-operative society insolvent; or

(c) subject to paragraph (b), the proposed purchase or acquisition would not, in the opinion of the Board, be detrimental to the financial stability of the purchasing co-operative society.

101. (1) A share may be transferred with the approval of the Board to any person, but if the transferee is not a member, he or she shall be approved as a member by the Board, or by a general meeting according to the bye-laws relating to the admission of members before the transfer can be registered.

(2) If the bye-laws require a member to hold more than Limitation on purchase of shares.

Transfer of shares generally. one share, a transferee shall acquire by the transfer, or by the transfer and allotment, the number so required to be held before the transfer can be registered.

(3) A transfer of shares shall be effected in a form that the Registrar may determine.

(4) A transfer of a share is not valid and effective unless and until the transfer has been registered by the Secretary on the direction of the Board.

(5) A transfer of a share, if made by a member indebted to the co-operative society, shall not be registered without the written permission of the Board and until the transfer is registered-

(a) a right shall not be acquired against the cooperative society by the transferee; and

(b) a claim of the co-operative society upon the transferor shall not be affected by the transfer.

102. (1) Where a member or person claiming through a cooperative society has become of unsound mind or incapable of managing his or her affairs and no committee, receiver or guardian has been appointed, the co-operative society may subject to this section and section 101 transfer the share or interest of the member to any person nominated by the member for the purposes of section 106 or may pay to the person nominated a sum

representing the value of the share or interest of the member ascertained in accordance with subsection (5).

(2) Subject to subsection (3), if no nominee has been appointed, the co-operative society may pay a sum representing the value of the member's share or interest to the Registrar of the High Court.

(3) If the value of the share or interest does not exceed one hundred dollars the Board may, subject to any conditions it thinks fit, pay the whole or any portion of such sum to the person Transfer of shares of member of unsound mind. who appears to have the care of the member or the management of the member's affairs.

(4) All transfers and payments made by a co-operative society in accordance with this section are valid and effective against any demand made upon the co-operative society by any person.

(5) For the purposes of this section and section 100, the value of any share or interest shall be represented by the sum actually paid for that share or interest by the member holding it unless the bye-laws of the co-operative society otherwise provide.

(6) Where the benefits group insurance have accrued on such share or interest, the value of such benefits is the amount actually received by the co-operative society on the account of such deceased member.

103. (1) On the death of a member of a co-operative society, where a person has been nominated by the member in accordance with section 106 and the nominee is admitted to membership of the co-operative society, the co-operative society shall within one year of the death of the member by whom the nomination was made, transfer the shares or interest of the deceased member to the nominee.

(2) On the death of a member of a co-operative society, where a person has been nominated by the member in accordance with section 106 has not been admitted to membership of the cooperative society or where the deceased member made no such nomination, the co-operative society shall within one year of the death of the member pay either to the nominee or to the legal personal representative of the deceased member, such sum as represents the value or part thereof of the deceased member's share or interest in the co-operative society.

(3) Nothing in this section shall be construed as prohibiting a nominee who has been admitted to membership from electing Transfer of share or interest on death of member. to receive payment representing the value of the deceased member's shares or interest instead of accepting a transfer.

(4) Where after a period of one year there is no nominee or legal personal representative of the deceased member to which the shares or interest may be transferred or to which a sum representing the value or part thereof of the deceased member's share or interest may be paid, the share or interest shall be transferred to the development fund of the co-operative society.

(5) The shares or interest transferred under subsection (4) shall remain in the development fund for a period not less than seven years during which period it shall remain available to bona fide claimants, after which it shall constitute a part of the reserves of the co-operative society.

104. Shares or interest or any part thereof in the capital of a cooperative society shall not be transferred unless the transfer is made to a member thereof or to a person whose application for membership has been accepted.

105. (1) Subject to the bye-laws, a transfer of shares in a cooperative society is not valid for any purpose unless—

(a) a written application for membership by the transferee is approved and the transfer is authorised by—

(i) a resolution of the directors; or

(ii) a person authorised by a resolution of the directors to approve applications and transfers of that kind; and

(b) notification of any approval given under paragraph (a) is sent to the transferee and his or her name has been entered on the register of members.

Restrictions on transfer of shares.

Conditions for the validity of transfer of shares.

(2) Notwithstanding subsection (1), a transfer of a share is valid for the purpose of providing evidence of the rights of the parties to the transfer between the transferor and the transferee.

106. (1) A member of a co-operative society may nominate a person or persons to or among whom there shall be transferred at his or her death such property in the co-operative society of which he or she is the owner at the time of his or her death, or as may subsequently have accrued thereon, whether in shares, loans or deposits, or so much thereof as is specified in such nomination if the nomination does not comprise the whole.

(2) A nomination under subsection (1) shall be made by instrument in writing signed by the member in the presence of two attesting witnesses and either delivered at or sent to the registered office of the co-operative society during the lifetime of such member or made in any book kept at the co-operative society's registered office.

(3) A member of the co-operative society may nominate more than one person only if he or she holds more than one share.

(4) A nomination made under subsection (1) may be revoked or varied by a subsequent nomination, or by a similar document in the nature of a revocation or variation, signed, attested and delivered, and sent or made in accordance with subsection (1), but any such nomination may not be revoked or varied by the will of the nominator or by a codicil thereto.

(5) All nominations and all revocations or variations received by a co-operative society shall be maintained in a separate record kept at the registered office of the co-operative society.

Power of nomination.

PART VI

BUSINESS OF CO-OPERATIVE SOCIETY

107. (1) A co-operative society which has as one of its objects the marketing of any article of produce obtained by the work or industry of its members may by its bye-laws or otherwise contract with its members—

(a) that every such member who produces any such article shall market the whole or any specified amount, portion or description thereof to or through the co-operative society; and

(b) that any member who is proved or adjudged to have contravened the bye-laws or to have acted in breach of the contract shall pay to the co-operative society liquidated damages in a sum ascertained or assessed in such a manner as may be prescribed in the bye-laws.

(2) A contract entered into under this section shall not be questioned in any court on the ground only that it is a contract in restraint of trade.

108. (1) A person to whom money has been lent by a cooperative society or who is otherwise indebted to the co-operative society may be required to create a charge in favour of the cooperative society in such form as may be prescribed in the Regulations.

(2) A charge shall so long as it continues in force confer on the co-operative society—

(a) the right upon the happening of any event specified in the charge as being an event authorising the Creation of charge in favour of a co-operative society.

Marketing of produce through the co-operative society.

chargee to seize the property subject to the charge, to take possession of any such property so subject;

(b) after an interval of five clear days, or such less time as may be specified in the charge, from the date of taking possession of any property subject to the charge, to sell such property either by auction or, if the charge so provides, by private treaty, either for a lump sum or for payment by instalments; and

(c) to apply the proceeds of sale in or towards discharge of the debt secured by the charge and the costs of seizure and sale, and to pay any surplus of such proceeds to the member whose property was sold.

(3) A charge shall, so long as it continues in force, impose on the chargor an obligation to pay to the co-operative society towards the discharge of his or her indebtedness the proceeds of sale of any property comprised in the charge or any money received under any policy of insurance or by way of compensation in respect of any such property, except in so far as the charge otherwise allows.

(4) A charge under this section is not a bill of sale within the meaning of the Bills of Sale Act.

109. (1) A charge created under section 108 shall be duly executed if signed by the person in quintuplicate in the presence of—

(a) the president of the co-operative society; and

(b) the secretary of the co-operative society.

(2) The secretary shall—

Chap. 78:22

Execution and registration of charge.

(a) file one copy of the charge at the registered office of the co-operative society and deliver one copy each to the Registrar of the High Court and the Registrar; and

(b) deliver one copy to the member.

(3) The Registrar of the High Court shall keep a book known as the “Co-operative Societies Charges Book” in which the Registrar shall register every charge delivered to the Registrar by the secretary of a co-operative society, and issue to the cooperative society a certified copy of the registration.

(4) The registration of a charge under subsection (3) is deemed to affect with notice any person dealing with the property comprised in the charge.

(5) Where a loan or other indebtedness in respect of which a charge was created is discharged, the secretary of the cooperative society shall—

(a) cause a document to that effect to be prepared in quintuplicate, and signed by the president and secretary of the co-operative society indicating that the charge has been discharged;

(b) file one copy of such document, deliver one copy each to the Registrar and the Registrar of the High Court who shall forthwith make an entry of satisfaction in the Co-operative Societies Charges Book; and

(c) deliver one copy to the member.

(6) A person may, on payment of the fee prescribed in regulations made under this Act, inspect the Co-operative Societies Charge Book and take extracts from it.

(7) A charge subsisting at the commencement of this Act in favour of a co-operative society is deemed to be registered in the Co-operative Societies Charges Book, and any such charge shall, without prejudice to anything contained therein, have the same force and effect as a charge created under this Act.

110. Nothing in section 108 affects—

(a) any claim of the Government in respect of taxes or money recoverable as such or of a landlord in respect of rent or money recoverable as rent; or

(b) the rights of any prior charges or encumbrance.

111. (1) Subject to any claim in respect of debt due to the Crown or to a landlord in respect of rent or any money recoverable as rent, any debt or outstanding demand owing to a co-operative society by a member or past member shall, notwithstanding anything contained in section 109, be a first charge—

(a) upon the crops or other agricultural produce whether standing or severed, raised in whole or in part with the loan from the co-operative society

by such member or past member; and

(b) upon any livestock, fodder for livestock, agricultural or industrial machinery or implements, or raw materials for use in manufacture or handicraft, or building used for the purpose of agriculture or industry, fishing or fish processing equipment to or purchased by such member or past member in goods or money granted to the member by the cooperative society.

(2) A person dealing with any of the property specified in subsection (1) is deemed to have notice of such first charge and all such dealing is subject to the charge and priority created by this Act.

Claims unaffected by charge.

Prior claims in favour of co-operative society.

112. (1) A co-operative society may enforce a charge by applying to the magistrate of the District in which the member resides or carries on business for a warrant of distress by certifying under seal to the magistrate the amount due and particulars of the property so charged and the magistrate shall issue a warrant of distress and may offer the sale of the property by public auction or private treaty.

(2) A magistrate has jurisdiction under subsection (1) even though the amount due exceeds the limits of jurisdiction of a magistrate specified in the Magistrates Code of Procedure Act.

113. (1) A co-operative society may borrow from any other co-operative society or from any bank approved by the Registrar on the security of a charge executed and registered in accordance with section 109 and may for this purpose assign the charge to the other co-operative society or bank.

(2) An assignment of a charge under this section shall be registered in the same manner as a charge and section 109 shall apply, subject to any necessary modifications, to an assignment so registered.

(3) An assignment of a charge when registered operates as a first charge in favour of the assignee subject to section 110.

(4) Where a charge is assigned to a co-operative society established with the object of facilitating the operation of other cooperative societies, the co-operative society may

borrow from any bank approved by the Registrar and for this purpose may reassign any such charge to the bank and subsections (2) and (3) applies, subject to any necessary modifications, to the reassignment.

114. (1) A co-operative society may require a member or officer to give a bond with or without sureties as additional security for the repayment of a loan.

Bond as security for charge.

Enforcement of charge.

Chap. 4:20

Assignment of charge.

(2) Conditions imposed on the member or officer relating to the payment of capital and interest under a charge or loan agreement shall be strictly observed and performed by the member or officer and on breach of any such condition the bond shall be forfeited forthwith.

(3) Section 113 relating to the assignment of charges applies subject to any necessary modifications to the assignment of bonds.

115. (1) A co-operative society shall have a lien on a share or any amount outstanding to the credit of a member or his or her legal representative for a debt due by that member to the cooperative society.

(2) A co-operative society may enforce a lien mentioned in subsection (1) in the manner set out in its bye-laws.

(3) The Board may, in default of payment by any member indebted to a co-operative society, apply the sum paid up for the time being on any shares held by that member in or towards the discharge of the debt so due and of any expenses relating to the debt or its discharge, and the defaulting member shall cease to have any further claim in respect of such shares.

116. The bye-laws of a co-operative society may provide that the co-operative society—

(a) may deduct an amount from the moneys it receives for the goods, products or services it has marketed, handled, or dealt in for or on behalf of a member or non-member patron; and

(b) may apply the amount prescribed in paragraph (a) towards a loan or the purchase of shares on such terms as the Board may determine.

Deductions applied to loans and shares.

Lien on shares.

117. (1) Subject to section 115, a co-operative society may purchase or otherwise acquire any of its shares that—

(a) are available for compulsory purchase under section 119; or

(b) are offered for sale.

(2) A co-operative society shall pay in cash, within one year of the date of purchase, for any shares purchased under subsection (1).

(3) A co-operative society shall pay a purchase price for a share purchased under this section equal to the par value of the share together with any dividends declared but unpaid with respect to the share.

(4) Subject to subsection (5), where a co-operative society purchases or otherwise acquires shares issued by it, those shares shall be deemed to be cancelled.

(5) Where the bye-laws of a co-operative society limit the number of shares, any shares of the co-operative society purchased or otherwise acquired by the co-operative society may be treated as unissued shares.

118. (1) Notwithstanding section 117, a co-operative society shall not purchase or otherwise acquire its shares where—

(a) it is insolvent;

(b) the proposed purchase or acquisition would render it insolvent; or

(c) subject to subsection (2), the proposed purchase or acquisition would, in the opinion of the Board, be detrimental to the financial stability of the cooperative society.

Prohibition on purchase of shares.

Purchase of shares.

(2) Where a purchase or other acquisition of shares under section 117 or 119, would in the opinion of the Board, impair the financial stability of the co-operative society or would be contrary to the interest of the remaining members the Board may suspend the purchasing or acquisition of shares.

(3) The Board may not suspend the purchase of shares under subsection (2) for a period longer than one year unless the suspension is approved—

(a) by the Registrar; or

(b) by a special resolution of the members.

119. Where—

(a) winding-up proceedings have commenced with respect to a body corporate that is a member of a co-operative society; or

(b) a member of a co-operative society has, during a period of two years, failed to transact any business with the co-operative society, the co-operative society may, by written notice to the member, require the member to sell his or her shares to the co-operative society.

PART VII

PROPERTY AND FUNDS OF CO-OPERATIVE SOCIETY

120. (1) The Board shall establish written policies for investing for income the accumulated funds of the co-operative society not used in the primary business of the co-operative society, and shall ensure they are in compliance with legislative requirements.

Investment of funds.

Compulsory sale of shares.

(2) Subject to subsections (3) and (4), the funds of a cooperative society including the reserve may be invested or deposited in—

(a) any central credit union, central finance facility, deposit guarantee or stabilisation fund for credit unions or co-operative societies, or other cooperative society registered under this Act;

(b) shares or deposits in, loans to, or on the security of, any co-operative society with limited liability;

(c) any financial institution licensed under the Banking Act, 2005 or any company registered under the Insurance Act;

(d) any stock, debentures, funds or securities issued by the government;

(e) securities, the payment of interest on which is guaranteed by the government;

(f) securities issued in a CARICOM Member State by a company incorporated in that member state and listed by the stock exchange of a CARICOM Member State if the company has paid dividends on its shares for the preceding five consecutive years;

(g) securities issued in a CARICOM Member State by a credit union that is registered in a CARICOM Member State in accordance with the laws of that CARICOM Member State;

- (h) real property but subject to the provision of section 199(5) where the co-operative society is a credit union; and
- (i) any other manner permitted by the Registrar.

Act No. 16 of 2005.

Chap. 78:49

- (3) The investments referred to in subsection (2) (d), (e), (f)), (g) and (i) shall not exceed in aggregate ten per cent of the unimpaired capital of a credit union.
- (4) The equity investment of a co-operative society in any entity shall be limited to twenty percent of the equity investment of that entity.
- (5) A society shall not invest the funds referred to in subsection (2) in a single institution or instrument.

121. (1) The Board of a credit union or a central credit union or central co-operative society shall establish written policies for the consideration, approval and administration of loans, guarantees, advances and other forms of financial assistance as a primary service to its members.

(2) Except for a loan to another co-operative society, a credit union shall not make a loan to a member by a co-operative society not included in subsection (1) and a loan shall not be made by a co-operative society mentioned in subsection (1) to a person who is not a member of that co-operative society.

(3) A credit union shall not make a loan to a director, committee member, or employee of the credit union of a sum in excess of the aggregate value of his or her shares, deposits and accumulated dividend and interest thereon unless adequate security is provided for the amount of the loan in excess of that value.

(4) A credit union shall not make a loan to a director, committee member or employee referred to in subsection (3) on any terms relating to interest rates, discounts or waivers or on any other terms more favourable than those offered to the general membership.

(5) A credit union shall not make a loan to a director, committee member or employee referred to in subsection (3), if when combined with all other outstanding loans to persons Loan by credit union. referred to in subsection (3), the persons' business interest or the persons' immediate family it exceeds twenty per cent of the credit union's share capital plus institutional capital.

(6) A credit union shall not make a loan to a member or a group of related members if the loan would cause the aggregate amount of loans to the member or the group of related members to exceed ten per cent of the share capital plus institutional capital.

(7) In accordance with section 82, a director, committee member or employee of a credit union shall declare his or her interest in a loan at a meeting in which the loan is to be discussed and shall not be present or be present at or participate in a meeting when his or her application for a loan is being considered.

(8) Any loan made in contravention of this section shall be void and shall be repaid to the co-operative society immediately.

(9) Subject to the other provisions of this section, the byelaws of a credit union shall provide for limits on the amounts of loans to any one member or on any type of loans.

122. Subject to this Act, a co-operative society shall not, directly or indirectly, give a loan, guarantee or other means of financial assistance—

(a) to a member, director, officer, committee member or employee of the co-operative society or an associate of any such person for any purpose; or

(b) to any person for the purpose of or in connection with, the acquisition of membership of the cooperative society or the purchase of a share issued or to be issued by the co-

operative society or member, where there are reasonable grounds to believe that the co-operative society is insolvent or would, after giving the financial assistance, be insolvent.
Prohibited loan.

123.(l) Subject to the provisions of any bye-laws of a cooperative society made for the purpose, a co-operative society may receive loans, grants and donated capital from persons or institutions that are not members of the co-operative society for the purpose of meeting any of its obligations or discharging any of its functions under this Act.

(2) A co-operative society may by mortgage or in any other manner it considers appropriate, guarantee the repayment of any sums received by it under subsection (1).

(3) Deposits shall be accepted in the manner and form and subject to any conditions that may be prescribed.

124. (l) A co-operative society may receive deposits from a minor and pay to such minor such deposit together with the interest accrued thereon.

(2) Any deposit made on behalf of a minor may, together with any interest accrued on the deposit, be paid to the parent of the minor or, where the minor is under the care of a guardian, to a guardian for the use of the minor.

(3) The receipt of a minor or his or her parent or guardian for money received under this section is a good and sufficient discharge of the liability of the co-operative society in respect of that money.

(4) Where a person under a legal disability, other than minority, is entitled to receive money from a co-operative society the money may be paid by the co-operative society to the Registrar of the High Court to the credit of the person under the disability, and the receipt of the Registrar of the Supreme Court or of the person under disability is good and sufficient discharge of the liability of the co-operative society to pay that money.

(5) The Registrar of the High Court may retain out of any money so paid to him or her a sum not exceeding one per cent Receipt of loans and deposits.

Receipt of deposits from minors. thereof for fees of office and shall pay or apply the remainder to or for the care, maintenance, education or benefit or the person under disability.

125. (1) Where a co-operative society realises a surplus in a financial year before it allocates among or credits to members the surplus, the directors—

(a) shall use any part of the surplus that the cooperative society will require to refund all or any part of a deficit it has previously incurred;

(b) shall establish and maintain a reserve to be known as its statutory reserves; and

(c) may provide, out of any surplus remaining after there has been compliance with paragraphs (a) and (b), in the manner set out in its bye-laws for payment out of the surplus, dividends on members' equity shares.

(2) The statutory reserves required by subsection (1)(b) is part of the institutional capital of the co-operative society and may, subject to the approval of the Registrar, be used in the business of the co-operative society, including unforeseen losses, unexpected shortfalls in liquid cash, capital retention, improved earnings, financing of non-earning assets, repair and maintenance and the avoidance of external borrowing.

(3) A co-operative society shall ensure that its statutory reserves and other institutional capital reserves are, at no stage, less than ten per cent of its total assets.

(4) If at the end of any financial year the amount standing to statutory reserves before any transfer under this section is less than ten per cent of total assets, the co-operative society shall transfer to statutory reserves for that year not less than twenty per cent of its surplus

or such lesser sum as may be required to increase the statutory reserves to ten per cent of total assets.

Allocation of surplus.

(5) Where at the end of any financial year the amount standing to statutory reserves before any transfer under this section is more than ten per cent of total assets, the co-operative society shall not make any transfer to statutory reserves.

(6) The Registrar shall grant a period of time that the Registrar considers reasonable to enable management to make good any deficiency in the adequacy of its capital base.

126. (1) A co-operative society shall establish and maintain a development fund, which may include any existing education fund or educational reserve.

(2) A co-operative society that realises a surplus from its operations as ascertained by the annual audit shall make an annual contribution to its development fund approved by its members at its annual general meeting not exceeding ten per cent of that surplus, and the co-operative society shall use the fund for strengthening the capacity and growth of co-operative societies and for human resource development.

(3) Subject to subsection (4), a co-operative society's development fund shall be administered in part or in whole by the apex body in accordance with its bye-laws.

(4) Where an apex body has not been established or is not functioning as such, the development fund shall be administered by such person or body of persons as the Registrar may determine, with the approval of the active co-operative societies.

127. (1) A co-operative society may establish a contributory pension fund for its servants and employees and may contribute to such fund.

(2) A pension fund established under subsection (1) shall not be considered part of the assets of the co-operative society but may be invested in such manner as may be prescribed by the bye-laws.

Pension fund.

Development fund.

128. After making the prescribed payments to its statutory reserve and development fund a co-operative society may contribute to any non-profit, charitable, benevolent, community, co-operative or cultural improvement purpose.

129. (1) Subject to this section and sections 125 and 126, any surplus may be distributed by way of dividend or bonus amongst its members in proportion to their business with the co-operative society at such rate as may be prescribed by its bye-laws.

(2) A co-operative society shall not—

(a) declare or pay a dividend or bonus or distribute any part of its accumulated funds before the financial statements have been certified by a qualified auditor;

(b) pay a dividend or make any payment on account out of profits until its institutional capital has reached a proportion of not less than five per cent of the total assets of the co-operative society; or

(c) declare or pay a dividend from unrealised gains including stock grants or share grants or gains arising from asset revaluation.

(3) A bonus based on wages or on the value of the products of a member or a bonus or patronage rebate calculated in proportion to the amount of the business done by each member with the co-operative society may be distributed periodically to the members from surplus funds after the deduction of all expenditure and making allocation to the statutory reserves.

PART VIII

FINANCIAL DISCLOSURE AND AUDIT

130. (1) The directors of a co-operative society shall place Annual financial statement.

Charitable contributions.

Dividend or bonus.

before the members at every annual general meeting of members of the co-operative society—

(a) comparative audited financial statements relating separately to—

(i) the period that began on the date the cooperative society came into existence and ended not more than twelve months after that date, or, if the co-operative society has completed a financial year, the period that began immediately after the end of the last period for which financial statements were prepared and ended not more than twelve months after the beginning of that period; and

(ii) the immediately preceding financial year;

(b) the report of the auditor; and

(c) any further information respecting the financial position of the co-operative society and the results of its operations required by the bye-laws.

(2) The financial statements mentioned in subsection (1)(a)(ii) may be omitted if the reason for the omission is set out in the financial statement to be placed before the members or in a note attached to the financial statement.

(3) The financial statements referred to in subsection (1)(a) shall include the balance sheet and detailed profit and loss accounts in respect of all business transacted by the co-operative society in the financial years covered by the statements, prepared in accordance with international accounting standards and including consolidated balance sheets and profit and loss accounts in any case where the co-operative society has subsidiaries or associated companies.

131. (1) The directors of a co-operative society shall approve the financial statements referred to in section 130, and the Approval of financial statements. approval shall be acknowledged by the signature of two or more directors.

(2) A co-operative society shall not issue, publish or circulate copies of the financial statements referred to in section 130 unless the financial statements are—

(a) approved and signed in accordance with subsection (1); and

(b) accompanied by an auditor's report and management letter from the co-operative society's auditor.

(3) A co-operative society shall not less than ten days prior to its annual general meeting, submit to the Registrar a copy of its audited annual financial statements, external auditor's report and management letter referred to in section 130.

132. (1) A co-operative society shall, not less than ten days before each annual general meeting of members, make available to each member a copy of its audited financial statements and report of the auditor referred to in section 130.

(2) Where a co-operative society applies to the Registrar and the Registrar is satisfied that there are reasonable grounds, the Registrar may excuse the co-operative society from complying with subsection (1).

133. (1) Subject to subsection (4), the members of a cooperative society shall—

(a) at the first general meeting, appoint an external auditor to hold office until the close of the first annual general meeting; and

(b) at each annual meeting, appoint an external auditor to hold office until the close of the next annual general meeting.

Providing financial statements.

Appointment of auditor.

(2) Notwithstanding subsection (1)(b), if an auditor is not appointed at an annual meeting, the incumbent auditor shall continue in office until his or her successor is appointed at a subsequent meeting.

(3) The Board shall specify the remuneration of an auditor.

(4) An individual shall not accept appointment, consent to be appointed or be appointed as auditor of a co-operative society if he or she is replacing an auditor who has resigned, been removed or whose term of office has expired or is about to expire, until the individual has requested or received from the former auditor a written statement of the circumstances and reasons why, in the auditor's opinion, the auditor is to be replaced.

(5) Notwithstanding subsection (4), an individual otherwise qualified may accept appointment or consent to be appointed as auditor of a co-operative society if, within twenty-one days of making the request referred to in that subsection, the individual does not receive a reply to it.

(6) An auditor shall not assume office unless he or she has confirmed in writing to the co-operative society his or her willingness to serve as auditor.

134. Subject to section 135, a co-operative society's auditor must be a member of a recognised professional body satisfactory to the Registrar and qualified to conduct audits.

135. (1) An individual is not qualified to be an auditor of a cooperative society if he or she is not independent of the cooperative society and its member co-operative societies, and of the directors and officers of the co-operative society and its member co-operative societies.

(2) For the purposes of this section whether or not an individual is independent is a question of fact to be determined having regard to all the circumstances.

Qualifications of Auditor.

Disqualifications for auditor.

(3) An individual is presumed not to be independent of a co-operative society if he or his business partner—

(a) is a member, a director, an officer or an employee of the co-operative society or any of its member co-operative societies or a business partner or employee of any director, officer, member or employee of any such co-operative society, or its member co-operative societies;

(b) is a member of a credit committee or any other committee of the co-operative society or any of its member co-operative societies;

(c) transacts a substantial amount of business with the co-operative society or any of its member cooperative societies;

(d) employed an individual serving as chief executive officer, chief accounting officer, chief financial officer, chief accounting officer or an equivalent position for the co-operative society during the one year period preceding the date of the initiation of the audit and that individual participated in any capacity in the audit of the co-operative society during that preceding year; or

(e) provides to the co-operative society contemporaneously with the audit, any non-audit service including—

(i) bookkeeping or other services relating to the accounting records or financial statements of the co-operative society;

(ii) financial information systems design and implementation;

- (iii) appraisal or valuation services, fairness opinions, or contributions-in-kind reports;
 - (iv) actuarial services;
 - (v) internal audit outsourcing services;
 - (vi) management functions or human resources;
 - (vii) broker, dealer or investment adviser services;
 - (viii) legal services and expert services unrelated to the audit; or
 - (ix) any other service that the Registrar determines is not permissible.
- (4) The provision of professional advice by or on behalf of an individual or his or her business partner does not by itself deprive an individual or his or her business partner of his or her independence for the purposes of this section.
- (5) An auditor who becomes disqualified under this section or has been replaced or whose term has expired shall immediately notify the Registrar in writing and state the reasons for termination of his or her appointment.
- (6) A member of a co-operative society may apply to the Registrar for an order or the Registrar may, upon its own motion, make an order declaring an auditor disqualified under this section and the office of auditor vacant.

136. (1) An auditor of a co-operative society ceases to hold office when he or she—

- (a) resigns by giving written notice to the co-operative society;
 - (b) is removed under section 137; or
 - (c) has held the office for three consecutive years.
- (2) The resignation of an auditor is effective at the time his or her written resignation is sent to the co-operative society, or at the time specified in the resignation, whichever is the later date.

Cessation of office of auditor.

(3) The cooperative society shall notify the Registrar in writing of the resignation of an auditor under subsection (1) within seven days of receipt of the resignation.

137. The members of a co-operative society may, by ordinary resolution at a special meeting remove an auditor other than an auditor appointed by the Registrar under section 140.

138. (1) Subject to subsection (4), the directors shall immediately fill a vacancy in the office of auditor.

(2) If there is not a quorum of directors, the directors then in office shall, within twenty-one days after a vacancy in the office of auditor occurs, call a special meeting of members to fill the vacancy.

(3) Where the directors fail to call a meeting under subsection (2) or where there are no directors, a meeting for the purpose of filling a vacancy in the office of auditor may be called by any member.

(4) The bye-laws of a co-operative society may provide that a vacancy in the office of auditor to be filled only by vote of the members.

(5) An auditor appointed to fill a vacancy shall hold office for the unexpired term of his or her predecessor.

139. Within thirty days after a change is made of its auditor, a co-operative society shall notify the Registrar in writing of the change and the Registrar shall file the notice.

140. If a co-operative society does not have an auditor, the Registrar may, upon the Registrar's own motion and shall, upon the application of a member, appoint and specify

the remuneration of an auditor, and the auditor shall, subject to section 133, hold office until an auditor is appointed in accordance with section 135.

Notice of change of auditor

Auditor appointed by Registrar.

Removal of auditor.

Filling vacancy of auditor.

141. The auditor of a co-operative society is entitled to receive notice of every annual general meeting of the members of the cooperative society, and to be heard in presenting his or her report at the meeting.

142. If a member of a co-operative society who is entitled to vote at a meeting of members, or a director of a co-operative society, gives written notice to the auditor or a former auditor of the co-operative society, not less than ten days before a meeting of members of the co-operative society, to attend the meeting, the auditor or former auditor shall attend the meeting at the expense of the co-operative society and answer questions relating to his or her duties as an auditor or former auditor.

143. (1) An auditor who—

(a) resigns;

(b) receives a notice or otherwise learns of a meeting of members called for the purpose of removing the auditor from office; or

(c) receives a notice or otherwise learns of a meeting of members or directors at which another person is to be appointed to fill the office of auditor, whether because of the resignation or removal of the incumbent auditor or because the auditor's term of office has expired or is about to expire, may submit to the co-operative society and to the Registrar a written statement giving the reason for his or her resignation or the reasons why he or she opposes any proposed action.

(2) When it receives a statement referred to in subsection (1), the co-operative society shall immediately send a copy of the statement to every member entitled to receive notice of any meeting of members and to the Registrar.

Auditor's right to notice.

Required notice.

Auditor's right to make representation.

144. (1) The auditor of a society shall examine its books and records and shall make a report on the annual financial statements and financial position to be placed before the members, and in every report the auditor shall state whether in the auditor's opinion financial statements, including the balance sheet and income and expenditure account give a true and fair view of the state of affairs of the society and of its results for the period then ended and submit any additional information in relation to the audit of the society as the Board or the Registrar considers necessary.

(2) It is the duty of the auditor to certify whether the appropriate measures to counter money laundering and other suspicious transactions are in place.

(3) The auditor shall, in the case of a credit union, submit a report on the financial and accounting systems and risk management controls of credit union.

(4) The Registrar may request copies of reports submitted to the co-operative society by both its internal and external auditors.

145. (1) On the demand of an auditor of a co-operative society the present or former directors, officers, employees or agents of the co-operative society shall provide to the auditor—

(a) information and explanations; and

(b) access to records, documents, books, accounts and vouchers of the co-operative society, as are in the opinion of the auditor, necessary to enable the auditor to make the examination and report required under section 144

and that the directors, officers, employees or agents are reasonably able to provide.

(2) On the demand of the auditor of a co-operative society, the directors of the co-operative society shall—

Auditor's right to inspect.

Examination by auditor.

(a) obtain from the present or former directors, officers, employees or agents of any member of the co-operative society, the information and explanations that the directors, officers, employees and agents are reasonably able to provide and that are, in the opinion of the auditor, necessary to enable the auditor to make the examination and report required under section 144; and

(b) provide the information and explanations so obtained to the auditor.

(3) A former or present director, committee member, employee or agent of any member of a co-operative society, shall not take any action fraudulently to influence, coerce, manipulate or mislead an independent auditor in the performance of an audit of the financial statements of a co-operative society for the purpose of rendering the financial statements materially misleading.

(4) A former director, officer, employee or agent of a member who contravenes subsection (2) or (3) commits an offence and is liable on summary conviction—

(a) in the case of a first offence to a fine not exceeding twenty five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding three months or to both;

(b) in the case of a subsequent offence to a fine not exceeding forty thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both.

146. (1) A director or an officer of a co-operative society shall immediately notify the co-operative society's auditor of any error or misstatement of which the director or officer becomes aware in a financial statement on which the auditor or former auditor has reported.

Error or misstatement.

(2) When the auditor or a former auditor of a cooperative society is notified or becomes aware of an error or misstatement in a financial statement on which he or she has reported to the co-operative society and in his or her opinion, the error or misstatement is material, he or she shall inform each director of the co-operative society accordingly.

(3) When under subsection (2) the auditor or a former auditor of a co-operative society informs the directors of an error or misstatement in a financial statement of the co-operative society, the directors shall—

(a) prepare and issue revised financial statements; or

(b) otherwise inform the members and the Registrar of the error or misstatement.

147. An auditor is not liable to any person in an action for defamation based on any act done or not done, or any statement made by him or her in good faith in connection with any matter he or she is authorised or required to do under this Act.

148. (l) Not less than ten days, or a shorter period that the Registrar may allow, before the date of its annual meeting a cooperative society shall—

- (a) file with the Registrar an annual return for the previous year, on the form provided by the Registrar; and
 - (b) provide the Registrar with a copy of the financial statement to be placed before its members at its next annual meeting.
- (2) Within thirty days of the end of each month, a cooperative society shall file a monthly return with the Registrar in accordance with the Regulations.
- Annual, monthly and special returns.
- Privilege of auditor.
- (3) The Registrar may, by notice in writing, require a cooperative society, director or officer of a co-operative society to make a special return on any subject connected with the business and affairs of the co-operative society including on risk focused information, prudential reports, quarterly reports of large credit exposures, non-performing loans, investments, assets and liabilities, variance reports.
- (4) Where the Registrar requests a special return under subsection (3), the Registrar shall specify in the notice a time within which the special return is to be made.

PART IX

EXAMINATIONS AND INVESTIGATIONS

- 149.** (1) In addition to the powers of routine inspection under sections 5(4) and 22(1) the Registrar may appoint a person as examiner who shall make an examination of the records and the affairs of the co-operative society.
- (2) In its request for an examination under this section, the Registrar may set such limits and conditions on the scope and conduct of the examination as the Registrar considers appropriate; and, in carrying out the examination, the powers of the examiner under of this section shall be limited accordingly.
- (3) An examiner requested by the Registrar to carry out an examination under this section may, on production of the examiner's authorisation to any person concerned, at all reasonable times inspect and take copies of, or extracts from, any books or documents relating to a co-operative society, and for any of those purposes may enter any premises at which any such books or documents are kept.
- (4) For the purposes of exercising his or her powers
- Examinations.
- under subsection (3) to take copies or extracts, an examiner may remove from the premises concerned, for a period and on conditions, if any, as to facilitate access by officers of the cooperative society, as may be reasonably necessary, to any books or documents referred to in that subsection.
- (5) An examiner who is carrying out an examination under this section in relation to a co-operative society may, with the approval of the Registrar, and subject to any limits imposed by that approval, carry out a similar examination in relation to any other body, whether a co-operative society or not, which is or has been at any relevant time been associated with the first-mentioned co-operative society, and for that purpose the examiner may exercise, in relation to any such body, any power conferred by subsections (3) and (4).
- (6) Where an examination is carried out under this section, the examiner shall make a report of the examination to the Registrar.
- (7) Where required to do so by notice in writing served by the Registrar at any time or by an examiner in the course of an examination
- (a) a co-operative society;
 - (b) any person who is or has been a director, member, agent or liquidator of a co-operative society; and

(c) any other person who has in his or her possession or power any books or documents relating to a cooperative society, shall provide the Registrar or the examiner such books, documents or information as may be specified in the notice which relate to the co-operative society and are in his or her possession.

(8) If required to do so by notice in writing served on it by the Registrar or by an examiner, a co-operative society shall provide to the Registrar or the examiner a financial statement or periodic financial statements in a form and containing such information as may be specified in the notice.

(9) If a notice under subsection (7) or (8) requires that-

(a) an item or information is to be furnished within a period, or a time or place specified in the notice; or

(b) information is to be verified by a statutory declaration, the co-operative society or person on whom the notice is served does not comply with the notice unless he also complies with that requirement.

(10) The Registrar or examiner may take copies of or extracts from any item produced in compliance with a notice under subsection (7) or (8) and if so required by the Registrar or examiner, the person on whom a notice under subsection (7) was served or, in the case of a statement produced in compliance with a notice under subsection (8), a person who is or has been a director, committee member, member, agent or liquidator of the co-operative society shall provide any explanation which may reasonably be required of an item so produced.

(11) Where a person on whom a notice is served under subsection (7) does not have in his or her possession or under his or her control an item specified in the notice but knows where it is, the person does not comply with the notice unless he or she states to the best of his or her knowledge and belief where the item is and, if so required, verifies that information by a statutory declaration.

(12) The production by a person of an item forming part of the books and documents of a co-operative society shall not prejudice any lien which that person claims over that item; but nothing in this section shall compel-

(a) the production by an attorney-at-law of any document containing a privileged communication made by or to him or her in that capacity; or

(b) the provision of information contained in a privileged communication so made.

(13) A person who contravenes subsection (7) or (8) commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding ten thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.

(14) If the Registrar considers it just and so requires by notice in writing, all or any of the expenses incurred by the Registrar in exercising his or her powers under subsection (7) shall be met, either wholly or to such extent as the Registrar may so require-

(a) out of the funds of the co-operative society; or

(b) by the directors or former directors of the cooperative society or any of them, and any sum which a co-operative society or other person is required to pay by a notice under this subsection is recoverable summarily by the Registrar as a civil debt.

(15) For the purpose of this section "agent" in relation to a co-operative society, includes its bankers, accountants, attorneys-at-law, auditors and its financial and other advisers.

(16) Subject to subsection 228(3), a director, committee member, employee or agent of a co-operative society shall not obstruct-

(a) any person who is carrying out an examination under this Act; or

(b) the examination of a co-operative society undertaken under this Act.

(17) A director, committee member, officer, employee or agent of a co-operative society who contravenes subsection

(16) commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding twenty thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both.

150. (1) Where-

(a) an application is made to the Registrar by the lesser of twenty-five members or ten per cent of the membership of a co-operative society, each of whom has been a member of the co-operative society throughout the period of twelve months ending on the date of the application; and

(b) the Registrar is of the opinion that it is necessary to do so in the interests of the orderly and proper regulation of the business of a co-operative society, the Registrar may appoint one or more investigators to investigate the affairs of the co-operative society.

(2) An application under subsection (1)(a) shall be supported by such evidence as the Registrar may require for the purpose of showing that the applicants-

(a) have good reason for requiring the investigation to be made; and

(b) have not been actuated by malicious motives in their application, and if so required by the Registrar the applicants shall deposit with it, prior to, and as security for the costs of, the investigation such sum as it may reasonably require. Investigations.

(3) If an investigator appointed under this section to investigate the affairs of a co-operative society thinks it necessary for the purpose of the investigation to investigate also the affairs of any other body, whether a co-operative society or not, which is or has at any relevant time been associated with the principal cooperative society, the investigator may do so with the approval of the Registrar.

(4) A notice of an application under subsection (1)(a) as the Registrar may require shall be given to the co-operative society concerned and, where applicable, to any other body whose affairs are to be investigated by virtue of subsection (3).

(5) Before appointing an investigator under this section, the Registrar shall, if the Registrar is of the opinion that it would not be prejudicial to the interests of the members or creditors of the co-operative society, notify the co-operative society in writing of the action which the Registrar proposes to take and of the grounds on which the Registrar proposes to take it and, in such case, the Registrar shall have regard to any explanatory statement in writing which may be given by the co-operative society within fourteen days from the receipt of the notification.

(6) In the case of an investigation, the expenses may be defrayed in the first instance by the office of the Registrar, but it is entitled to be repaid these expenses—

(a) where the investigation results from an application under subsection (1)(a), by the applicants, to such extent, if any, as the Registrar may direct;

(b) in any case, by the co-operative society or the other body, to such extent, if any, as the Registrar may direct; and

(c) in any case, by a person convicted of an offence in proceedings instituted as a result of the investigation, to such extent, if any, as the court by which the person was convicted may order, and a person liable under any of paragraphs (a) to (c) is entitled to contributions from any other person liable under the same paragraph according to the amount of their respective liabilities.

(7) Where an examination undertaken under this section reveals substantial irregularities in the business of the co-operative society, the Registrar may choose not to direct any members on whose motion the examination was commenced to defray the expenses.

151. (1) A member, the Registrar or any interested person may apply ex parte, or on any notice that the Court may require, to the Court for an order directing an investigation to be made of the co-operative society and any of its member co-operative societies.

(2) On an application under subsection (1), the Court may order an investigation of a co-operative society or of any of its member co-operatives where it appears to the Court that—

- (a) the co-operative society is not fulfilling the purpose stated in its bye-laws;
 - (b) the co-operative society is not carrying on business in accordance with this Act, the Regulations or the bye-laws;
 - (c) the co-operative society is not organised or being operated on co-operative principles;
 - (d) the business of the co-operative society or any of its member co-operative societies is or has been carried out with intent to defraud any person;
 - (e) the business or affairs of the co-operative society or any of its member co-operative societies are or have been carried on or conducted, or the powers of the directors are or have been exercised, in a manner that is oppressive or unfairly prejudicial to or that has unfairly disregarded the interests of a member or of a security holder; Investigations by Court.
 - (f) the co-operative society or any of its member cooperative societies was formed for a fraudulent or unlawful purpose or is to be dissolved for a fraudulent or unlawful purpose; or
 - (g) persons concerned with the formation, business or affairs of the co-operative society or any of its member co-operative societies have acted fraudulently or dishonestly, in connection with the co-operative society.
- (3) An applicant for an order under this section is not required to give security for costs.
- (4) An ex parte application under this section shall be heard in camera.
- (5) A person shall not publish anything relating to ex parte proceedings conducted under this section other than with the authorisation of the Court or the written consent of the cooperative society being investigated.

152. In connection with an investigation under section 151(1), the Court may make any order it considers appropriate, including an order—

- (a) to investigate;
- (b) appointing an investigator, who may be an employee of the Registrar, fixing the remuneration of an investigator and replacing an investigator;
- (c) determining the notice to be given to any interested person or dispensing with notice to that person;
- (d) authorising an investigator to enter any premises in which the Court is satisfied there might be relevant information, and to examine anything and make copies of any document or record found on the premises;
Court Order.
- (e) requiring any person to produce documents or records to the investigator;
- (f) authorising an investigator to conduct a hearing, administer oaths and examine any person on oath, and prescribing rules for the conduct of the hearing;
- (g) requiring any person to attend a hearing conducted by an investigator and to give evidence on oath;
- (h) giving directives to an investigator or any interested person on any matter arising in the investigation;
- (i) requiring an investigator to make an interim or final report to the Court and to the Registrar;
- (j) determining whether a report of an investigator made under paragraph (i) should be published and, where published, ordering the Registrar to publish the report in whole or in part or to send copies to any person the court designates;

(k) requiring an investigator or an examiner appointed under section 149 to discontinue an investigation; and (1) requiring the co-operative society or a person who made an application under section 151(1) for an order to pay the costs of the investigation.

153. (1) An investigator appointed under section 152(b) has the powers set out in the order appointing him or her.

(2) In addition to the powers set out in the order appointing an investigator, the investigator may provide to, or exchange information and otherwise co-operate with, any public official in Dominica or elsewhere who is—

(a) authorised to exercise investigatory powers; and Powers of investigator.

(b) investigating, with respect to the co-operative society, an allegation of improper conduct that is the same as or similar to the conduct described in section 151(2).

154. (1) An interested person may apply to the Court for an order that a hearing conducted by an investigator appointed under section 152 be heard in camera and for directions on any matter arising in the investigation.

(2) A person whose conduct is being investigated or who is being examined at a hearing conducted by an investigator appointed under section 152(b) has a right to be represented by an attorney -at-law.

155. (1) A person shall not be excused from attending and giving evidence and producing documents and records to an investigator appointed under section 190(b) by reason only that the evidence tends to incriminate the person or subject the person to any proceedings or penalty.

(2) Evidence described in subsection (1) shall not be used or received against any person in any proceeding instituted against the person, other than a prosecution for perjury in giving evidence.

156. (1) An oral or written statement or report made during the course of, or as the result of, an investigation or examination authorised by this Part by an investigator or an examiner, or by any other person acting in accordance with powers conferred by this Part in respect of an investigation or examination, has absolute privilege.

(2) Nothing in this Part affects the privilege that exists in respect of an attorney-at-law and his or her client.

Incriminating statements.

Absolute privilege respecting statements.

Hearing in camera.

PART X

RECEIVERS AND RECEIVER-MANAGERS

157. (1) Where, in the opinion of the Registrar or the High Court, based on the results of an examination undertaken under section 149, it is necessary to appoint a receiver or a receivermanager to protect the equity of the members, the Registrar or the Court may appoint a receiver or a receiver-manager.

(2) An appeal shall lie to the Court of Appeal against the appointment of a receiver or receiver manager by the Registrar or the High Court within ten days of the appointment.

158. (1) Subject to the rights of secured creditors, a receiver of any property of a co-operative society may—

(a) receive the income from the property and pay the liabilities connected with the property; and

(b) realise the security interest of those on whose behalf the receiver is appointed.

(2) Notwithstanding subsection (1) and subject to any order that the Court may make under section 162, a receiver who is not appointed as manager of a co-operative society shall not carry on the business of the co-operative society.

159. (1) Where a receiver of a co-operative society is also appointed manager of the co-operative society, the receiver may carry on any business of the co-operative society to protect the equity of the members.

(2) A receiver or receiver-manager appointed by a Court or the Registrar shall be discharged by the Court or Registrar if in the opinion of the Court or Registrar the equity of the members has been sufficiently protected as to enable the society to be returned to its members.

Revival of dissolved cooperative society.

Functions of receiver.

Appointment of receiver or receiver-manager

160. Where a receiver or receiver-manager is appointed by a Court or the Registrar, no directors of the co-operative society shall exercise the directors' powers that the receiver or receivermanager is authorised to exercise until the receiver or receivermanager is discharged.

161. (1) A receiver or receiver-manager appointed by a Court shall act in accordance with any directions of the Court.

(2) A receiver or receiver-manager appointed by the Registrar shall act in accordance with any directions of the Registrar.

(3) A receiver or receiver-manager shall—

(a) act honestly and in good faith, and

(b) deal with any property of the co-operative society in his or her possession or control in a commercially reasonable manner.

162. On an application by a receiver or a receiver-manager of a co-operative society, whether appointed by the Court or the Registrar, the Court may make any order it thinks fit, on any matter including—

(a) appointing, replacing or discharging a receiver or receiver-manager and approving his or her accounts;

(b) determining the notice to be given to any person or dispensing with notice to any person;

(c) fixing the remuneration of the receiver or receivermanager;

(d) requiring the receiver or receiver-manager—

(i) to make good any default in connection with his custody or management of the property and business of the co-operative society; and

Directions by Court.

Duty of receiver or receiver-manager.

Cessation of Board's powers.

(ii) to relieve the receiver or receiver-manager from any default on any terms that the court considers appropriate;

(e) confirming any act of the receiver or receivermanager; and

(f) giving directions on any other matter relating to the duties of the receiver or receiver manager.

163. (l) Where a receiver or a receiver-manager is appointed by the Registrar, the receiver or receiver-manager may apply to the Registrar for directions on any matter relating to his or her duties.

(2) Where the Registrar receives an application under subsection (1), it may make any order it considers appropriate, including any other similar to an order described in section 162(c) to (f).

164. A receiver or receiver-manager shall—

(a) in the case of a receiver or receiver-manager appointed by the Court, immediately notify the Registrar of his or her appointment or discharge;

(b) take into his or her custody and control the property of the co-operative society in accordance with the Court order or the order of the Registrar under which he or she is appointed;

(c) open and maintain a bank account in his or her name as receiver or receiver-manager of the cooperative society for the moneys of the cooperative society coming under his or her control;

(d) keep detailed accounts of all transactions carried out by him or her as receiver or receiver-manager;

(e) keep accounts of his or her administration that he Required actions by receiver.

Directions by Registrar. or she shall cause to be available during usual business hours for inspection by the directors of the co-operative society, the Registrar or any person authorised by the Registrar;

(f) prepare at least once in every six-month period after the date of his or her appointment financial statements of his or her administration, as far as is practicable in the form required in section 130;

(g) on completion of his or her duties, render a final account of his or her administration in the form he or she has adopted for preparation of interim accounts under paragraph (f); and

(h) file with the Registrar a copy of any financial statement mentioned in paragraph (f) and any final account mentioned in paragraph (g) within

fifteen days of the preparation of the financial statement or rendering of the final account.

PART XI DISSOLUTION

165. (l) Subject to the approval of the Registrar, the members of a co-operative society may authorise the dissolution of the cooperative society.

(2) The Board shall cause a notice of a special meeting of members to be sent in the manner specified in section 46 to each member for the purpose of authorising dissolution.

(3) Each member of the co-operative society has the right to vote with respect to dissolution.

(4) For the purpose of subsection (1) dissolution is authorised when the members approved the dissolution by a special resolution of the membership.

Dissolution by members.

(5) Where the Registrar—

(a) receives notice, in a form satisfactory to it, of an authorisation to dissolve a co-operative society; and

(b) is satisfied that it is in the best interest of the cooperative society and its members, the Registrar shall approve the dissolution.

(6) An authorisation approved under subsection (4) shall set out—

- (a) the assets and liabilities of the co-operative society;
 - (b) the claims of any creditors;
 - (c) the number of members; and
 - (d) the nature and extent of the members' interest in the co-operative society.
- (7) Subject to subsection (9), where a co-operative society has an unallocated surplus and the authorisation approved under subsection (4) states that it is not to be paid out at the time of the co-operative society's dissolution, the unallocated surplus shall be paid to one or more trustees who are—
- (a) named in the special resolution; or
 - (b) where not named in the special resolution, appointed by the Registrar.
- (8) The trustees named or appointed under subsection (7) shall—
- (a) deposit the money in a special trust account—
 - (i) in a co-operative society; or
 - (ii) in any financial institution licensed under the Banking Act, 2005 or any company registered under the Insurance Act; or
 - (b) invest the money in—
 - (i) securities issued by the Government;
 - (ii) securities the payment of interest on which is guaranteed by the government; or
 - (iii) any other manner authorised by the Registrar.
- (9) Where a trust is created under subsection (7), the income and principal of the trust shall be expended within a period of twenty years from the date that the trust was established for any cooperative purpose the Registrar considers fit.
- (10) In this section—
- (a) "interest" includes the interest of a member in a co-operative society and includes member loans and obligations of any kind that—
 - (i) arise by virtue of the bye-laws of the cooperative society; and
 - (ii) are owed by the co-operative society to the members;
 - (b) "unallocated surplus" includes any net proceeds from the sale of assets on dissolution of the cooperative society after the liabilities of the cooperative society and the claims of creditors and members have been satisfied.

166. (1) When the Registrar approves a special resolution passed under section 165, the Registrar shall, at the expense of the co-operative society, cause a notice of the special resolution to be published—

- (a) in the *Gazette*; and

Notice of dissolution by members.

Act No. 16 of 2005.

Chap. 78:49

- (b) once a week for two weeks in a newspaper published and circulated in Dominica.

(2) Notwithstanding subsection (1), where the Registrar receives an affidavit from the officers of a co-operative society stating that the co-operative society has no assets and no liabilities and it is satisfied that it is appropriate, the Registrar may-

- (a) exempt the co-operative society from subsection

(1); and

- (b) cause, at the Registrar's expense, a notice of the special resolution passed under section 165(1) to be published in the *Gazette*.

(3) The Registrar shall require from a co-operative society, liquidator or trustee appointed by a co-operative society or any other person who is required to provide information, an annual or other return showing-

- (a) the progress of dissolution;

- (b) the distribution of any undistributed surplus or reserve;
- (c) the progress of the administration of a trust established in accordance with this section;
- and
- (d) any other information that it may require.

167. (1) Where the Registrar has reasonable cause to believe that a co-operative society-

- (a) has not commenced business within twelve months after the date shown on its certificate of registration; or
- (b) has not carried on business for twelve consecutive months, the Registrar shall send to the secretary of the co-operative society a letter inquiring whether the co-operative society is Dissolution by Registrar. carrying on business, is in operation or is submitting an annual return.

(2) Where the Registrar does not, within one month of the date it sent a letter under subsection (1), receive an answer to the letter, the Registrar shall, within fourteen days after the expiry of the month, send to the secretary of the co-operative society a letter referring to the letter sent under subsection (1) and stating that—

- (a) no answer to that letter has been received by the Registrar; and
- (b) if an answer is not received to the letter sent under this subsection within one month from the date it is sent, a notice will be published in the Gazette to strike the name of the co-operative society off the Register and to dissolve the co-operative society.

(3) Where the Registrar—

- (a) receives an answer from a co-operative society that it is not carrying on business or is not in operation or will not be submitting an annual return; or

- (b) does not, within one month after the date that the Registrar sent a letter under subsection (2), receive an answer to that letter, the Registrar shall publish in the *Gazette* and send to the cooperative society a notice that, at the expiry of one month from the date of that notice, the co-operative society will, unless cause is shown to the contrary, be struck off the register and the cooperative society will be dissolved.

(4) At the expiry of the period mentioned in a notice sent under subsection (3), the Registrar shall, unless cause to the contrary is previously shown by the co-operative society—

- (a) where the Registrar is satisfied that the cooperative society has no assets or liabilities, issue a certificate of dissolution in the prescribed form; or
- (b) appoint a liquidator to dissolve the co-operative society.

168. (1) Where a co-operative society fails to provide a copy of the annual financial statements to its members at an annual or special meeting called for that purpose or within a period of twelve months after the close of its financial year, the Registrar—

- (a) may require the directors to call a special meeting of the co-operative society for the purpose of considering the business transacted during the preceding financial year and for providing to the members and to the Registrar a copy of the annual financial statement; and

- (b) shall, where the Registrar requires a special meeting to be called under paragraph (a), determine a time period within which the special meeting is to be called.

(2) Where the directors fail to call a special meeting within the time period set out in subsection (1), the Registrar may call the special meeting—

- (a) to review the financial position of the co-operative society and the members' interests in the cooperative society; and

(b) to ascertain whether the members wish to continue the business of the co-operative society and to comply with sections 130 and 132.

(3) Where-

(a) a quorum of members is not present at a special meeting called under subsection (2); or Dissolution for failure to account for business.

(b) the members fail to pass a resolution to the effect that the co-operative society is to carry on business and to comply with section 130 and 132, the Registrar shall notify the directors that, unless sections 130 and 132 are complied with within one month from the date of the notice, the co-operative society will be struck off the register and dissolved.

(4) Notwithstanding subsection (3), the Registrar may extend the period for compliance with sections 130 and 132.

(5) Where a co-operative society does not comply with sections 130 and 132 within the period mentioned in subsection (3) or set by the Registrar under subsection (4) the Registrar shall-

(a) where the Registrar is satisfied that the cooperative society has no assets or liabilities, issue a certificate of dissolution in the prescribed form; or

(b) appoint a liquidator to dissolve the co-operative society.

169. (1) The Registrar or an interested person may, after giving the co-operative society three months notice of the proposed application, apply to the Court for an order dissolving a cooperative society, if the co-operative society-

(a) obtained its registration by fraud or mistake;

(b) exists for an illegal purpose;

(c) has wilfully, after notice by the Registrar, violated any of the provisions of this Act, the Regulations or its bye-laws;

(d) is no longer operating on co-operative principles; or

(e) has the number of its members reduced below the
Dissolution by Court.

minimum number required by this Act for the cooperative society.

(2) Where an interested person applies under this section, he or she shall give the Registrar notice of his or her application and the Registrar is entitled to appear and be heard and represented either by a member of staff of the Registrar or by an attorney-at-law.

(3) Where the Court receives an application under this section, the Court may order that the co-operative society be dissolved or liquidated and dissolved under the supervision of the Registrar.

(4) Where the Registrar receives an order made under subsection (3), the Registrar shall where the order is-

(a) to dissolve the co-operative society, issue a certificate of dissolution in the prescribed form; or

(b) to liquidate and dissolve the co-operative society under the supervision of the Registrar, publish a notice in the *Gazette*.

170. (1) Where a co-operative society has been dissolved under this Part, any interested person may apply to the Registrar to have the co-operative society revived by submitting to the Registrar-

(a) an application for revival in such form as the Registrar may approve; and

(b) such other information as the Registrar may require.

(2) Where the Registrar receives an application for revival under subsection (1) and the Registrar is satisfied that the co-operative society is in compliance with this Act, the Registrar may-

Revival of dissolved cooperative society.

(a) issue a certificate of revival in the prescribed form and publish notice of the revival in the *Gazette*; and

(b) impose any conditions on the co-operative society that it considers reasonable with respect to the co-operative society.

(3) A co-operative society is revived on the date shown in the certificate of revival.

(4) Where a co-operative society is revived under this section, it-

(a) has all the rights and privileges; and

(b) is liable for the obligations, that it would have had if it had not been dissolved, subject to any terms that may be imposed by the Registrar and to any rights acquired by any person after its dissolution.

171. (1) Where-

(a) a co-operative society is to be dissolved under this Part; or

(b) no liquidator is appointed by the members or the Court; the Registrar may appoint a liquidator to wind up the affairs of the co-operative society.

(2) Notwithstanding subsection (1) where the Registrar is satisfied that the co-operative society has no assets and liabilities, he may issue a certificate of dissolution in the prescribed form.

172. The liquidation of a co-operative society commences where-

Appointment of liquidator.

Commencement of liquidation.

(a) a special resolution for dissolution of the cooperative society is approved by the Registrar under section 165;

(b) the Registrar appoints a liquidator under section 167 or 168;

(c) the Court makes an order to dissolve under section 169; or

(d) the registration of a co-operative society is cancelled by the Registrar under sections 18 or 23 of this Act.

173. (1) From the date of the commencement of its liquidation-

(a) a co-operative society continues in existence, but shall cease to carry on its business except insofar as may be required, in the opinion of the liquidator, for an orderly liquidation; and

(b) any transfer of shares, other than a transfer made to or with the approval of the liquidator, and any alteration in the status of the members made after commencement of the liquidation is void.

174. (1) Where two or more liquidators are appointed, all the provisions in this section with respect to a liquidator apply to all of the liquidators.

(2) On the appointment of a liquidator under this Part, all the powers of the directors vest in the liquidator.

(3) A liquidator may delegate any of the powers vested in him or her under subsection (2) to the directors or members.

(4) Where the members of a co-operative society appoint a liquidator, they may, at that time or at a subsequent general

Cessation of business.

General provisions respecting liquidators.

meeting, pass a resolution giving direction to the liquidator with respect to the disposal of the property of the co-operative society.

(5) Where-

(a) the members appoint a liquidator and do not issue direction under subsection (4); or
(b) a liquidator is not appointed by the members, the liquidator is subject to the directions, orders and instructions of the Registrar with respect to the mode and terms and conditions on which the liquidator may dispose of the whole or any part of the property of the co-operative society.

(6) Where a vacancy in the office of liquidator occurs, the Registrar may appoint another person to fill the vacancy.

(7) In all proceedings connected with the co-operative society, the liquidator is to be described as the liquidator of the cooperative society and not by his or her individual name only.

175. On his or her appointment, a liquidator shall-

(a) immediately give notice of his or her appointment-

(i) in the case of a liquidator not appointed by the Registrar, to the Registrar; and

(ii) to each claimant and creditor known to the liquidator;

(b) immediately publish notice of his appointment in the Gazette and once a week for two consecutive weeks in a newspaper published and circulated in Dominica;

(c) set out in the notice mentioned in paragraphs (a) and (b) a provision requiring any person—

(i) indebted to the co-operative society, to render an account and pay to the liquidator at the

Duties of liquidators.

time and place specified;

(ii) possessing property of the co-operative society, to deliver it to the liquidator at the time and place specified; and

(iii) having a claim against the co-operative society, whether liquidated, unliquidated, future or contingent, to present particulars of the claim in writing to the liquidator not later than two months after the first publication of the notice;

(d) take into his or her custody and control the property of the co-operative society;

(e) open and maintain a trust account for the monies of the co-operative society;

(f) maintain separate lists of the members, creditors and other persons having claims against the cooperative society;

(g) where at any time the liquidator determines that the co-operative society is unable to pay or adequately provide for the discharge of its obligations, apply to the Registrar for directions; and

(h) deliver to the Registrar and the co-operative society, at least once in every twelve-month period after his or her appointment or more often as the Registrar may require, financial statements of the co-operative society in the form required in section 130 or in any form that the liquidator considers proper or that the Registrar may require.

176. (1) The liquidator may-

(a) retain attorneys-at-law, accountants, engineers, appraisers and other professional advisors;

Powers of liquidator.

(b) bring, defend or take part in any civil, criminal or administrative action or proceeding in the name and on behalf of the co-operative society;

(c) carry on the business of the co-operative society as required for an orderly liquidation;

- (d) sell by public auction or private sale any property of the co-operative society; or
 - (e) do all acts and execute any documents in the name and on behalf of the co-operative society;
 - (f) borrow money on the security of the property of the co-operative society;
 - (g) settle or compromise any claims by or against the co-operative society; and
 - (h) do all other things that he considers necessary for the obligation of the co-operative society and distribution of its property.
- (2) Where a liquidator has reason to believe that a person has in his or her possession or under his or her control or has concealed, withheld or misappropriated any property of the cooperative society, he may apply to the Court for an order requiring that person to appear before the Court at the time and place designated in the order and to be examined.
- (3) Where the examination mentioned in subsection (2) discloses that a person has concealed, withheld or misappropriated property of the co-operative society, the court may order that person to restore the property or pay compensation to the liquidator on behalf of the co-operative society.
- (4) A liquidator shall not purchase, directly or indirectly, any part of the stock-in-trade, debts or assets of the co-operative society.

177. (l) A liquidator is not liable where he or she relies in good faith on-

- (a) financial statements of the co-operative society presented to him or her by-
 - (i) an officer of the co-operative society; or
 - (ii) the auditor of the co-operative society in a written report that states that the financial statements reflect fairly the financial condition of the co-operative society; or
- (b) an opinion or statement of an attorney-at-law, accountant, engineer, appraiser or other professional advisor retained by the liquidator.

178. (1) A liquidator shall pay costs of liquidation out of the property of the co-operative society and shall pay or make adequate provision for all claims against the co-operative society.

(2) After the date specified by the liquidator for distribution under section 175(c)(iii), the liquidator may distribute all or any part of the assets of the co-operative society among the parties entitled to the assets having regard to the claims of which the liquidator has notice.

(3) The liquidator is not liable for any part of the assets of the co-operative society distributed under subsection (2) to any person notice of whose claims the liquidator did not have at the time of distribution.

(4) When distributing the assets of a co-operative society under this section, the liquidator shall pay, in priority to the claims of the creditors of the co-operative society, the wages or salaries of all persons, other than directors, employed by the co-operative society at the time of the commencement of the obligation or within one month before, not greater than three months' wages or salary, and those persons are entitled to rank as creditors of the co-operative society for any residue of the claims.

Cost of liquidation.

Limitation on liability of liquidator.

179. (1) In the liquidation of a co-operative society the funds, including the statutory reserves, shall be applied -

- (a) firstly to the cost of liquidation;
- (b) secondly to the discharge of the liabilities of the co-operative society;
- (c) thirdly to the payment of share capital; and
- (d) fourthly, if the bye-laws of the co-operative society permit, to the payment of a dividend at a rate not exceeding 10% per annum for any period during

which no distribution of profits has been made.

(2) Any surplus remaining after the application of the funds to the purposes specified in subsection (1) may, at the discretion of the Registrar, be used for any co-operative purpose the Registrar considers fit.

(3) Where the liquidation is closed in accordance with subsection (1), the Registrar shall-

(a) issue directions with respect to the custody or disposal of the documents and records of the cooperative society; and

(b) discharge the liquidator.

(4) Where the Registrar discharges a liquidator under subsection (3), the Registrar shall issue a certificate of dissolution in the prescribed manner.

(5) The co-operative society ceases to exist on the date shown in the certificate of dissolution.

180. A person who has been granted custody of the documents and records of a dissolved co-operative society remains liable to produce those documents and records for six years following the date of its dissolution or until the expiry of any other shorter period that the Registrar may set.

Custody of records.

Closure of liquidation.

181. (1) Where there is no agreement or provision fixing the remuneration of a liquidator, the liquidator is entitled to a commission based on the net proceeds of the estate of the co-operative society realised after deducting his or her expenses and disbursements.

(2) The amount of the commission mentioned in subsection (1) shall be equal to-

(a) 5% on the first \$1,000 realised;

(b) 2.5% on the next \$4,000 realised; and

(c) 1.25% on any sum greater than \$5,000 realised.

(3) Where a liquidator applies to the Registrar, the Registrar may increase the amount of commissions set out in subsection (2).

(4) A liquidator is entitled to any fee or charge for his or her services in addition to the commission allowed under this section.

182. (1) Notwithstanding the dissolution of a co-operative society under this Act-

(a) a civil, criminal or administrative action or proceeding commenced by or against, the cooperative society before its dissolution may be continued as if the co-operative society had not been dissolved;

(b) a civil, criminal or administrative action or proceeding may be brought against the cooperative society within two years after its dissolution as if the co-operative society had not been dissolved; and

(c) any property that would have been available to satisfy any judgment or order if the co-operative

Continuation of actions.

Remuneration of liquidator society had not been dissolved shall remain available for that purpose.

(2) Service of a document on a co-operative society after its dissolution may be effected by serving the document on a person shown on the records of the Registrar as one of the last directors of the co-operative society.

(3) Notwithstanding the dissolution of a co-operative society, a person to whom any of its property has been distributed is liable to any person claiming under subsection (1) to the extent of the amount received by that person on the distribution with respect to any share

of the co-operative society that that person held, and an action to enforce such liability may be brought within two years after the date of dissolution of the co-operative society.

183. (1) On the dissolution of a co-operative society, the liquidator shall convert into money the portion of the property distributable to a creditor or member who cannot be found after a reasonable investigation and shall deposit the money in a cooperative society or with trustees appointed by the Registrar.

(2) A payment under subsection (1) shall be in satisfaction of a debt or claim of the creditor or member.

(3) Where a creditor establishes within three years after the dissolution of a co-operative society that he or she is entitled to any money paid under subsection (1) to a co-operative society or to trustees appointed by the Registrar, the co-operative society or the trustees shall pay the amount of the claim out of the monies deposited.

(4) Where moneys deposited under this section are not distributed within three years after the dissolution of a cooperative society then, subject to the approval of the Registrar, the co-operative society or the trustees appointed by the Registrar shall distribute those monies in accordance with section 179(2) or the bye-laws.

Unknown claimant or members.

184. (1) Where, in the course of the dissolution of a cooperative society it appears that any person who has taken part in the organisation or management of the co-operative society or any past or present officer of the co-operative society has misapplied or retained or become liable or accountable for any money or property of the co-operative society or has been guilty of misfeasance or breach of trust in relation to the co-operative society, the Registrar may, on the application of the liquidator or of any creditor or contributor, carry out an examination into the conduct of such person and make an order requiring the person to repay or restore the money or any part of it with interest at a rate that the Registrar thinks just or to contribute such sum to the assets of such co-operative society by way of compensation in regard to the misapplication, retainer, dishonesty or breach of trust as the Registrar thinks just.

(2) This section applies notwithstanding that the act is one for which the offender may be criminally responsible.

185. Any person aggrieved by an order of the Registrar made under section 184 may appeal to the Tribunal within twenty-one days from the date of the order and the decision of the Tribunal shall be final on any question of fact.

186. (1) This Part does not apply to a co-operative society that is bankrupt within the meaning of the Bankruptcy Act.

(2) Where a co-operative society is at any time found, in proceedings under the Bankruptcy Act. to be bankrupt within the meaning of that Act, any proceedings taken under this Part to dissolve or to liquidate and dissolve the co-operative society shall be stayed.

Appeal against surcharge.

Application of Part VIII.

Chap. 9:90.

Power of Registrar to surcharge.

PART XII

RECONSTRUCTION OF CO-OPERATIVE SOCIETIES

187. (1) The reconstruction of a co-operative society is subject to the approval of the Registrar and may be effected by—

- (a) the amalgamation of one co-operative society with another co-operative society to form a single co-operative society;
- (b) the transfer of the assets and liabilities of one cooperative society to another co-operative society; or
- (c) the division of a co-operative society into two or more co-operative societies.

(2) Sections 190 to 193 apply with respect to the procedure to be followed in relation to subsection (1).

188. (1) A company registered under the Companies Act, 1994 or a registered industrial, provident or friendly co-operative society may, by special resolution, determine to convert itself into a co-operative society.

(2) A special resolution for conversion into a co-operative society under subsection (1) shall appoint ten members of the company or the industrial, provident or friendly co-operative society who together with the secretary, shall sign the proposed bye-laws and who may, by resolution, be given such powers to act on behalf of the company or the industrial, provident or friendly cooperative society as may be specified in the resolution.

(3) A copy of the special resolution referred to in subsection (1) with three copies of the bye-laws shall be sent to the Registrar who may, on receipt of the copies, register the cooperative society and issue a certificate in accordance with section 16.

Conversion.

Act No. 21 of 1994.

Method of reconstruction.

189. (1) On the date of the certificate of registration issued under section 188—

(a) the incorporation or registration under any other enactment of the company or the industrial, provident or friendly co-operative society ceases and shall be cancelled by the proper officer;

(b) the conversion of the company or the industrial, provident or friendly co-operative society is effective;

(c) the property of the company or the industrial, provident or friendly co-operative society becomes the property of the co-operative society;

(d) the co-operative society is liable for the obligations of the company or the industrial, provident or friendly co-operative society;

(e) an existing cause of action, claim or liability or prosecution against the company or the industrial, provident or friendly co-operative society is not affected;

(f) a civil, criminal or administrative action pending against a converted company or an industrial, provident or friendly co-operative society may be continued against the registered co-operative society; and

(g) a conviction against or a ruling, order or judgment in favour of or against a company or an industrial, provident or friendly co-operative society may be enforced by or against the registered co-operative society.

(2) An obligation or penalty arising under any of the matters mentioned in subsection (1) for which the former company, industrial, provident or friendly co-operative society is liable or potentially liable at the date of the certificate of registration issued under section 188 shall have priority as against the property of the

registered co-operative society over all other rights or claims against, or liabilities of the registered co-operative society.

190. (1) Any two or more co-operative societies may, by a resolution passed by not less than three-fourths of all the members of each co-operative society present and voting at a special general meeting called for the purpose, amalgamate as one cooperative society.

(2) Where a resolution referred to in subsection (1) is passed, each such co-operative society shall apply to the Registrar for cancellation of its registration and the co-operative societies shall jointly make application for the registration of the amalgamated co-operative society.

(3) On the registration of an amalgamated co-operative society the assets and liabilities of the amalgamating societies vest in the amalgamated society.

(4) Where the assets held by amalgamating co-operative societies involves real estate, a copy of the resolution referred to in subsection (1), and a copy of the certificate of registration of the amalgamated society, shall be recorded at the Land Registry.

191. (1) Any co-operative society may, by resolution passed by not less than three-fourths of all the members present and voting at a special general meeting called for the purpose, agree to transfer its assets and liabilities to any other co-operative society which has agreed to accept them.

(2) The acceptance of that other co-operative society shall be by a resolution passed by not less than three-fourths of the members of that other co-operative society present and voting at a special general meeting called for the purpose.

Transfer of assets of cooperative societies.

Amalgamation of cooperative societies.

(3) On the passing of the resolutions referred to in subsections (1) and (2), the transferor co-operative society shall apply to the Registrar for cancellation of its registration and the transferee co-operative society shall submit to the Registrar a copy of the transferee co-operative society's resolution agreeing to the transfer.

(4) Subject to subsection (5), the cancellation of registration and the submission of the resolution agreeing to accept the transfer is sufficient to vest the assets and liabilities of the transferor to the transferee.

(5) Where the vesting of the assets of a co-operative society involves real estate, a copy of the resolution referred to in subsection (1), certified as such by the Registrar, shall be recorded at the Land Registry.

192. Notwithstanding sections 190 and 191 an amalgamation or transfer shall not be effected unless the creditors of the cooperative societies concerned are given three months' written notice of the proposal and have signified that they have no objections.

193. (1) A co-operative society may, by resolution in this section referred to as a "preliminary resolution" passed by threefourths of the members present and voting at a special general meeting called for the purpose, resolve to divide itself into two or more co-operative societies.

(2) A preliminary resolution—

(a) shall contain proposals for the division of the assets and liabilities of the co-operative society among the new co-operative societies into which it is proposed to divide the co-operative society; and Claims of objecting creditors.

Division of co-operative society.

(b) may specify the area of operation of, and the members who will constitute, each of the new cooperative societies.

(3) A copy of the preliminary resolution shall be sent to the Registrar and all members and creditors of the co-operative society that is being divided.

(4) At least ten days notice of the preliminary resolution shall be given to any person whose interest will be affected by the division of the co-operative society, and by publishing the notice in the Gazette and in at least two issues of a newspaper published and circulated in Dominica.

(5) A member of a co-operative society may, notwithstanding any bye-law to the contrary, by notice given to the co-operative society within a period of three months from his or her receipt of the preliminary resolution, state his or her intention not to become a member of any of the new co-operative societies.

(6) A creditor of the co-operative society may, notwithstanding any agreement to the contrary, by notice given to the co-operative society within a period of three months from his or her receipt of the preliminary resolution, state his or her intention to demand the payment of moneys due him or her.

(7) Any person, other than a member or creditor, whose interest may be affected by the division of a co-operative society may, by notice given to the co-operative society, object to the division unless his or her claim is satisfied.

(8) After the expiry of three months from the receipt of the preliminary resolution by all the members and creditors of the co-operative society and of the notice to other persons given under subsection (4), another special general meeting of the cooperative society, of which at least fifteen days notice shall be given to its members, shall be convened for the consideration of the preliminary resolution.

(9) If at the special general meeting referred to in subsection (8) the preliminary resolution is confirmed by a special resolution either without changes or with such changes as in the opinion of the Registrar are not material, the Registrar may, subject to subsection (11) and section 16, register the new cooperative societies; and on registration, the original co-operative society shall be taken to be dissolved and its registration cancelled.

(10) The decision of the Registrar as to whether any changes made in the preliminary resolution are material is final and is not subject to any appeal.

(11) At the special general meeting referred to in subsections (8) and (9) provision shall be made by another resolution for -

(a) repayment of the share capital of all the members who have given notice under subsection (5);

(b) satisfaction of the claims of all the creditors who have given notice under subsection (6); and

(c) satisfaction of the claims of the other persons, who have given notice under subsection (7), but no member or creditor or other person is entitled to the repayment or satisfaction until the preliminary resolution is confirmed in accordance with subsection (9).

(12) Where within such time as the Registrar considers reasonable-

(a) the share capital of the members referred to in subsection (11)(a) is not repaid;

(b) the claims of the creditors referred to in subsection (11)(b) are not satisfied; or

(c) the claims of the other persons mentioned in subsection (11)(c) are not satisfied or secured, the Registrar may refuse to register the new cooperative societies.

194. The registration of new co-operative societies established under section 193 is sufficient to vest the assets and liabilities of the original co-operative society in the manner specified in the preliminary resolution as confirmed in accordance with section 193(8) and (9).

PART XIII DISPUTES

195. (1) Where any dispute that relates to the business of a cooperative society arises-

- (a) among members, former members and persons claiming through members or deceased members;
- (b) between a member, former member or person claiming through a member or a deceased member, and the co-operative society, its Board, or any officer of the co-operative society;
- (c) between the member and the co-operative society arising out of or under any bye-law relating to the disposal of the produce of agricultural or animal husbandry, or under any contract made under this Act;
- (d) between the co-operative society and any other co-operative society; or
- (e) between the co-operative society and its Board, committee member or employee, any party to the dispute may refer it to the Registrar for decision.

(2) The Registrar may, before proceeding to hear or determine a dispute, make or cause to be made a preliminary investigation to-

Settlement of disputes.

Effect of registration of new co-operative societies.

- (a) ascertain the cause;
- (b) define the issues; and
- (c) bring about a voluntary settlement between the parties to the dispute.

(3) The Registrar may either hear the dispute or delegate authority to hear the dispute to an employee or an office holder, and make and issue a decision, or it may appoint an arbitrator, who shall be an attorney-at-law of at least five years standing, to do so.

(4) For the purposes of hearing any dispute the Registrar or the arbitrator appointed by the Registrar—

- (a) may administer oaths; and
- (b) may require-
- (i) the attendance of all parties concerned and witnesses; and
- (ii) the production of all books, documents and things relating to the dispute.

(5) The Registrar or the arbitrator may order the expenses of determining any dispute, including fees to a barrister and solicitor, to be paid by the co-operative society or by any of the parties to the dispute.

(6) A party aggrieved by a decision of the Registrar or an arbitrator may appeal to the Tribunal within such time and in such manner as may be prescribed.

(7) Notwithstanding anything in this section, a co-operative society may exercise any rights arising by law under any charges, mortgages, bills of sale or other securities duly executed in accordance with this Act or any other law without recourse to arbitration.

(8) For the purposes of subsection (1), a claim by a cooperative society for any debt or demand due to it from a member, former member or the personal representative of a deceased member is a dispute that relates to the business of a co-operative society within the meaning of subsection (1).

196. (1) There shall be a Co-operative Societies Appeals Tribunal which shall consist of three persons, one of whom shall be an attorney-at-law of at least five years standing, who shall be appointed by the Minister for Finance after consultation with the Minister for Co-operatives.

(2) A member of the Tribunal holds office for a term not exceeding three years and is eligible for reappointment.

(3) The Tribunal has jurisdiction to hear appeals against a decision of the Registrar or an arbitrator.

(4) The Schedule shall have effect with respect to the constitution and procedure of the Tribunal.

(5) The Minister may by regulations made under this Act amend Part 2 of the Schedule, and such regulations shall be subject to affirmative resolution of the House of Assembly.

197. (1) In accordance with the Arbitration Act and notwithstanding anything contained in sections 195 and 196, the Registrar or an arbitrator may, in the course of or on making a decision in a dispute, refer a question of law arising therefrom to the Court, by way of case stated for the opinion of that Court.

(2) A judge may consider and determine any question of law so referred and the opinion given on such question shall be final and binding.

198. (1) An award by the Registrar or an arbitrator may, by leave of the Court, be enforced in like manner as a judgment or Case stated on question of law.

Enforcement of award and recovery of loans.

Co-operative Societies Appeals Tribunal.

order of the court, and where leave is so given, judgment may be entered in terms of the award.

(2) Where a dispute relates to the recovery of a loan made by a co-operative society to a member of that co-operative society, such a dispute may, notwithstanding section 195, be brought before the magistrate for the district in which the cooperative society conducts business.

(3) A magistrate has jurisdiction under subsection (2), even though the amount due exceeds the limits of jurisdiction of a magistrate specified in the Magistrates Code of Procedure Act.

PART XIV

SPECIALISED CO-OPERATIVE SOCIETIES

Credit Unions

199. (1) The Registrar shall administer the system of regulation and supervision of credit unions provided for under this Act with a view to-

(a) the protection by each credit union of the funds of its members; and

(b) the maintenance of financial stability and wellbeing in credit unions generally.

(2) The Registrar has power to do anything which, in his or her opinion, is necessary to facilitate the exercise of its functions or is incidental to or consequential on their exercise, and, in the exercise of any such power the Registrar may consult other bodies as appear to him or her to be expert or knowledgeable in matters relating to credit unions.

(3) The registration of a credit union or the imposition of any prudential, supervisory or reporting requirements or conditions Functions of Registrar, immunity, sanctions and corrective action. by the Registrar does not constitute a warranty as to the solvency of the credit union to which registration is given and the Registrar is not liable in respect of any losses incurred through the insolvency or default of a co-operative society which is registered as a credit union.

(4) Where after an examination under section 149 or after an investigation under section 150, or on the receipt of any other information the Registrar is of the opinion, that it is necessary to act in the interest of the orderly and proper regulation of the business of a credit union, in addition to the powers conferred by section 5, the Registrar may-

(a) place the credit union under administrative supervision; and

(b) take any other necessary action to correct the non-compliance or unsafe or unsound practice, including-

- (i) prohibiting the disposal, conveying or encumbering of any of the credit union's assets;
- (ii) prohibiting the incurring by the credit union of any debt, obligation or liability;
- (iii) prohibiting the investing of any of the credit union's funds;
- (iv) prohibiting the withdrawal of any of the credit union's accounts at other financial institutions;
- (v) suspending the credit union's acquisition of fixed assets;
- (vi) suspending or restricting the credit union's lending operations; and
- (vii) increasing the credit union's allocation to reserves.

(5) The credit union shall comply with the requirements of the Registrar under subsection (4) and where the credit union fails to do so, the Registrar may appoint an administrator for the credit union, for a period not exceeding twelve months.

(6) If at any time the Registrar determines that the credit union is not in condition to continue business under the administrator, in the interest of the members, depositors or creditors and in accordance with section 157, the Registrar may appoint a receiver or a receiver-manager for the credit union.

(7) All costs incidental to the period of administrative supervision constitute an allowable charge against the assets of the credit union and shall be paid as the Registrar may determine.

200. (1) A credit union shall not underwrite insurance or the issue of securities by another person.

(2) Nothing in subsection (1) prevents a credit union from requiring insurance for the security of the credit union.

(3) A credit union shall not demand from a potential borrower that—

(a) any additional services, including appraisal valuations or security, be obtained from a specific provider; or

(b) the borrower should utilise any other services of the credit union, as a condition of, or in consideration of, obtaining a loan.

(4) Subject to subsection (5), a credit union may only hold real property the aggregate market value of which does not exceed ten per cent of its total assets.

(5) Notwithstanding subsection (4), the Registrar may, if the Registrar is satisfied that the circumstances require it, grant Restrictions. approval to a credit union to hold real property in excess of the percentage specified in subsection (4).

(6) Subsection (5) does not apply where the credit union exercises its legal right in respect of any property which is the security for any debt, and in such a case, the property shall not be retained for a period in excess of five years without the permission of the Registrar unless in the meantime the aggregate value of the real property held by the credit union is reduced to below the percentage specified in subsection (4).

(7) Nothing in subsection (4) shall be interpreted as requiring a credit union to-

(a) dispose of any real property that was acquired before the coming into force of this Act; or

(b) terminate any agreement to acquire or hold any real property where the agreement was entered into before the coming into force of this Act.

(8) Without prejudice to the generality of subsection (1), a credit union may, with the permission of the Registrar, do all other acts and things as are incidental or conducive to or consequential upon the attainment of its objects.

201. (1) A credit union shall at all times keep a proportion of its total assets in liquid form as prescribed in the Regulations that will enable the credit union to meet its liabilities as they arise.

(2) For the purpose of complying with subsection (1) a credit union shall ensure that no less than fifteen per cent or such greater percentage as may be specified by the Registrar from time to time, of its members unencumbered deposits and other short term liabilities, are maintained in a liquidity reserve; but nothing in this Act shall be taken to prevent a credit union keeping liquid assets in addition to those required for complying with subsection (1).

Liquid assets.

(3) Subject to section 125(1)(b), a credit union shall not capitalise its statutory reserves by way of bonus shares or distribute it by way of dividends.

(4) Despite section 125(1)(b), whenever the Board of a credit union recommends to the members and a majority of the members present and voting at a general meeting by resolution approve -

(a) the allocation to its statutory reserves may be increased; or

(b) if its statutory reserves at the end of the financial year in question equals or exceeds ten per cent of assets, the allocation may be reduced.

202. (1) A credit union shall at least annually evaluate the quality and collectability of the loan portfolio and establish adequate loan loss allowance.

(2) The Registrar may, after consultation with credit unions, and in accordance with international credit union safety and soundness principles or any principles or standards prescribed, issue guidelines to implement the requirement for an adequate loan loss allowance.

203. (1) A loan made by a credit union shall be approved in accordance with the policies established by the directors before any funds are advanced.

(2) A loan to a director, officer, committee member or an employee of a credit union or an associate of any of them, shall be approved in the manner prescribed.

(3) A person who knowingly approves or grants a loan by a credit union in contravention of this Act or the Regulations is liable for any losses resulting to the credit union in connection with that loan.

Loan loss provision

Loan approval.

204. (1) Subject to any restrictions that may be prescribed in the Regulations, a credit union may take any security for loans and other risk assets that it considers advisable and in keeping with sound business and risk management practices.

(2) For the purposes of this section, "risk assets" means loans, investments and other property of the co-operative society with possible loss results, which form the basis of determining the amount of the co-operative society's income to be set aside as provision for loss.

205. The limits on the amount of loans made by a credit union shall be in accordance with section 121.

206. (1) Where a credit union is reporting loans, it shall report the loans at their fair value deducting provision for loan impairment on the balance sheet in its annual financial statements under section 202.

(2) Any advance given by way of overdraft or line of credit is deemed to be a loan for the purposes of the balance sheet and shall be reported as a loan.

207. (1) The maximum intervals at which interest on loans made by a credit union are to be paid may be prescribed.

(2) The rate of interest to be charged on loans shall be fixed from time to time by the Board.

(3) Where a borrower has not paid the interest on a loan for a period prescribed, the credit union shall not include that interest in income.

208. (1) Subject to section 123, a credit union may accept deposits from-

(a) members;

(b) other co-operative societies;

Loan limits.

Reporting loans.

Interest on loans.

Acceptance of deposits.

Security on loans.

(c) government and non-government agencies; and

(d) bodies corporate.

(2) Deposits may be accepted in the manner and form and on any condition that may be prescribed.

209. (1) A credit union is not bound to see to the execution of any trust, whether express, implied or constructive, to which any deposit or share is subject.

(2) Where any deposit or share is subject to a trust of which the credit union has notice, the receipt or order-

(a) of the trustee in whose name the deposit or share stands; or

(b) if the deposit or share stands in the names of two or more trustees, of all those trustees or any of them who, under the document creating the trust, may be entitled to receive the deposit or share, is, notwithstanding any trust to which the depositor share is subject, a sufficient discharge to the credit union for the payment of any money payable in respect of the deposit or share, and the credit union is not bound to see to the application of any money paid on the receipt or order.

(3) Notwithstanding any neglect or omission on the part of a credit union to enter a proper description in its books, an executor, an administrator, a guardian, a committee or a trustee who is entered on the books of the credit union as a member, or who is described as representing a named estate, trust or trust beneficiary in such capacity is not personally liable to the credit

union with respect to the share that he or she represents.

(4) The estate or trust beneficiary represented by a person described in subsection (3) continues to be liable to the Credit union trusts. credit union in the same manner and to the same extent as if the testator, minor, ward, person of unsound mind, beneficial trust or their trust beneficiary were entered on the records of the credit union as the holder of the shares.

Consumers Co-operative societies and Housing Cooperative societies

210. (1) Subject to subsection (2), an employee of a consumers' society, or housing society or service society shall not be a director of the society.

(2) A society shall provide in its bye-laws that none of its elected directors shall be employees.

211. The relationship between a housing co-operative society and its members is not a relationship between a landlord and his or her tenants.

212. The bye-laws of a housing co-operative society shall include, in addition to the matters required by section 13—

- (a) the manner in which each member may be required to provide capital for the purposes of the cooperative society;
- (b) the manner in which a member may be required to pay for housing charges or other reserves;
- (c) the basis for fixing the amount of housing charges;
- (d) subject to section 30, the manner of withdrawal by a member and the repayment of a member's interests in the co-operative society; and
- (e) the rules governing any leases of housing units by members to non-members.

213. Where the bye-laws of a co-operative society provide that Relationship with members.

Bye-laws.

Amendment of bye-laws.

Restrictions on directorship.

it is a housing co-operative society or that this Part applies to the co-operative society, the co-operative society shall not repeal or amend that provision of the bye-laws without the consent of the Registrar.

214. Where a housing co-operative society has a share capital the co-operative society shall not pay any dividend on the share capital to its members.

215. (1) Where a person's membership in a housing cooperative society is terminated, any right of that person to possess or to occupy residential premises acquired by virtue of membership in the co-operative society is terminated.

(2) Where a person's membership in a housing cooperative society is terminated and the member does not give up possession of the housing unit he or she occupies, the housing cooperative society may apply to the Court to recover possession or to recover any arrears of housing charges.

216. (1) Where a member of a housing co-operative society—

(a) has his or her membership terminated or has vacated or abandoned the housing unit formerly occupied by him or her; and

(b) has left property in the housing unit, the co-operative society may apply to the Magistrates Court or for the District where the housing unit is situate for an order authorising it to remove the property from the housing unit and sell or otherwise dispose of it.

(2) The Magistrate may make an order under subsection (1) where the Magistrate is satisfied that the housing co-operative society has made a reasonable effort to locate the former member.

Abandoned goods.

No dividend on share capital.

Right to possession on termination.

(3) Where a housing co-operative society sells or otherwise disposes of property under an order made under subsection (2), it shall pay into the Magistrate's Court, to the credit of the former member, any remaining proceeds of the disposition after deducting any—

(a) amount with respect to costs incurred by it relating to the disposition that it would be authorised to retain if the property were goods sold under distress for housing charges; and

(b) arrears of housing charges and damages that the Magistrate allows.

(4) Where a former member does not claim the remaining proceeds described in subsection (3) within three months after the date the money was paid into the Magistrates Court, the money shall be paid into the Consolidated Fund.

(5) Where a housing co-operative society removes, sells or otherwise disposes of property under an order made under subsection (2), the housing co-operative society is not liable in any action taken by the former member with respect to the removal, sale or disposition.

Industrial Co-operative Societies

217. (1) In an industrial co-operative society, seventy-five per cent of all employees shall be members of the co-operative society.

(2) An industrial co-operative society shall not subcontract out more than fifty per cent of its work without the consent of the Registrar.

218. In addition to the matters required to be set out in the byelaws under section 13, the bye-laws of an industrial co-operative society shall include-

Membership.

Bye-laws.

(a) conditions of admission, expulsion or suspension of its members;

(b) a procedure for laying off members when there is a lack of work and a procedure of recall to work;

(c) remuneration of workers involved in the day to day work of the co-operative society; and

(d) allocation of bonus among members.

219. An industrial co-operative society shall not be registered where the acquisition of goods for sale to the public is one of its principal objects stated in its bye-laws.

220. When allocating among creditors or paying a bonus to the members, the directors of an industrial co-operative society may take into account the labour contribution of each member.

221. Directors of an industrial society shall not be employees of the society.

PART XV

APEX BODY

222. Co-operative societies may establish an apex body which shall be composed of such member representatives of the majority of co-operative societies which may exist in Dominica.

223. The apex body shall be a co-operative society under this Act and shall co-ordinate, assist and promote activities for the development, growth and expansion of all co-operative societies and shall perform representational and other functions as may be determined by its members.

Bonus based on labour.

Employees may be directors.

Establishment and constitution of apex body.

Functions.

Restriction on registration.

224. (1) The officers of the apex body shall be elected at the first meeting of that body and shall hold office for a period of one year and thereafter the election of such officers shall be in accordance with the bye-laws of the apex body.

(2) The apex body shall regulate its own procedure and may establish its own central credit union or central co-operative society in conjunction with other apex bodies and co-operative societies to provide specialised services and facilities to members.

225. The Registrar shall, from time to time, consult the apex body or a central credit union or central co-operative society with respect to matters relating to the development of co-operative societies.

PART XVI OFFENCES

226. (1) A member, agent or employee of a co-operative society shall not accept, agree to accept, obtain or attempt to obtain whether for himself or another, any gift or consideration as an inducement reward for-

(i) doing or forbearing to do any act relating to the business of the co-operative society; or
(ii) for showing favour or disfavour to any person in relation to the business of the co-operative society.

(2) A person shall not give, agree to give, or offer a gift or consideration to any member, agent or employee of a cooperative society as inducement or reward for any purpose mentioned in subsection (1).

(3) A person who contravenes subsection (1) or (2) commits an offence and is liable-

Consultation by

Registrar.

Corrupt practices and bribery.

Officer.

(i) on summary conviction to a fine not exceeding ten thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both; or

(ii) on conviction on indictment to a fine not exceeding fifty thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding three years, or to both.

(4) In this section "consideration" includes valuable consideration of any kind.

227. (1) A person shall not-

(a) obtain possession of any property or the grant of a loan from a co-operative society by false representation or other corrupt means;

(b) wrongfully withhold or misapply any property belonging to or loan from a co-operate society; or

(c) wilfully apply any part of property belonging to or loan from a co-operate society for purposes other than those directed or expressed in the bye-laws of the co-operative society or authorised in this Act or the Regulations.

(2) A person who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable-

(a) on summary conviction to a fine not exceeding five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both; or

(b) on conviction on indictment to a fine not exceeding twenty thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both.

(3) In any proceedings under this section the person accused may, in addition to any penalty imposed, be ordered-

Falsely obtaining property of co-operative society.

(a) to deliver up any property or repay any sum of money to which the proceedings relate; and

(b) pay the cost of the proceedings.

228. (1) A person shall not-

(a) fail without reasonable cause or wilfully neglect or refuse to comply with a requirement of this Act or the Regulations or to provide any information

in circumstances for which a penalty is not provided elsewhere in this Act; or

(b) purporting to comply with a requirement for information under this Act, provide information which the person knows to be false.

(2) A person shall not wilfully or without reasonable cause disobey any summons, order or direction lawfully issued under this Act or the Regulations.

(3) A person shall not knowingly alter, destroy, mutilate, conceal, cover or falsify or make a false entry in any record or document of or belonging to a co-operative society with intent to impede, disrupt or influence an investigation or the proper administration of any matter.

(4) An officer or member of a co-operative society shall not wilfully contravene the by-laws of the co-operative society in relation to his or her duties or functions as an officer or member.

(5) A person who contravenes subsection (1), (2) (3) or (4) commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding twenty thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both.

229. (1) A person shall not-

(a) fraudulently remove any property comprised in a Failure to comply with the Act. Dealing in property subject to charge. charge created in favour of a co-operative society from the place where the property was situated at the time of the execution of the charge; or

(b) knowingly dispose of, or deal with or attempt to dispose of or deal with the property without first obtaining in writing leave of the co-operative society.

(2) A person who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both.

(3) The Court may in addition to any penalty imposed on a person under subsection (1), require that person to repay the amount of the loan with interest as has not been repaid at the date of the conviction and the payment of that amount shall discharge the liability of the borrower to repay the loan.

230. (1) A person shall not make or assist in making a report, return, notice or other document, required by this Act or the Regulations to be sent to the Registrar to any other person, that—

(a) contains an untrue statement of a material fact; or

(b) omits to state a material fact required in the report or necessary to make a statement contained in the report not misleading in the light of the circumstances in which it was made.

(2) A person who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable on summary conviction in the case of an individual, to a fine not exceeding five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both; or in the case of a person other than an individual, to a fine not exceeding ten thousand dollars.

Offences with respect to reports.

(3) A person does not commit an offence under subsection

(2) where the untrue statement or omission was unknown to him or her, and in the exercise of reasonable diligence, could not have been known to him or her.

231. (1) A person shall not fail to-

(a) give any notice or fail to send any return or document that is required for the purpose of this Act; or

(b) hold an annual or special general meeting within the stipulated or extended time in conformity with sections 42, 43 and 44 of the Act.

(2) A person who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable on summary conviction-

(a) in the case of a first offence to a fine not exceeding five thousand dollars;

(b) in the case of a subsequent offence to a fine not exceeding ten thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months.

(3) Where a body corporate commits an offence under this Act or the Regulations and the offence is proved to have been committed with the consent or connivance of, or to be attributable to any neglect on the part of—

(a) any director, manager, secretary or other similar officer of the body corporate; or

(b) any person who was purporting to act in such capacity, he or she, as well as the body corporate, shall commit the offence and be liable to be proceeded against and punished accordingly.

(4) For the purposes of subsection (2), “director”, in Contravention of the Act. relation to a body corporate whose affairs are managed by its members, means a member of the body corporate.

(5) The Minister may in Regulations create an offence punishable on summary conviction by a fine not exceeding twenty thousand dollars or imprisonment for a term not exceeding two years or by both.

232. (1) A person shall not in doing business in Dominica-

(a) use the words “credit union” or “co-operative” or any abbreviation or derivation thereof as part of the name of the business or with respect to goods, wares, merchandise or services or the person’s method of conducting business; or

(b) hold himself or herself or his or her business to be a registered co-operative society, unless the person or his or her business is registered under this Act.

(2) A person who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding five thousands dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both.

233. Where a person is convicted of an offence under this Act or the Regulations, the court may, in addition to any punishment imposed, order the person to comply with the provision of this Act or the Regulations for the contravention of which he or she has been convicted.

234. The effluxion of time is no bar to prosecution for an offence under this Act.

235. A civil remedy for an act or omission under this Act is not suspended or affected by reason that the act or omission is an offence under this Act.

Use of words “credit union” and “cooperative”.

Court order to comply.

Limitation.

Preservation of civil remedy.

PART XVII

ABANDONED PROPERTY HELD BY CREDIT UNIONS

236. (1) Subject to subsection (2), where there has been no activity relating to the property specified in paragraphs (a) and (b) for a period of 15 years except for the posting of interest and dividends the property specified in paragraphs (a) and (b) is presumed to be abandoned-

(a) any general deposit, demand, savings or matured time deposit made in Dominica with a credit union, together with any interest or dividend, but excluding any lawful charges;

(b) any funds paid in Dominica toward the purchase of shares or other interests in a credit union, together with any interest or dividend, but excluding any lawful charges where there has been no activity for one year;

(2) The property specified in paragraphs (a) or (b) of subsection (1) shall not be presumed abandoned unless correspondence by the credit union has been issued to the last known address of the owner of the property at least once every three years reminding the owner that if no activity is evidenced for a period of 15 years the property is presumed to be abandoned.

(3) The property specified in paragraphs (a) or (b) of subsection (1) shall not be presumed abandoned if the owner has, within 15 years of the establishment of the account –

(a) increased or decreased the amount of the deposit or funds;

(b) presented the passbook for the crediting of interest or dividends;

(c) corresponded in writing with the credit union concerning the property; or

Abandoned property in credit union.

(d) otherwise indicated an interest in the property.

(4) Where any contents of a safety deposit box on which the lease or rental has expired and concerning which notice of the intention of the credit union to deliver the contents thereof into the custody of the Minister responsible for Finance has been sent by Registered letter to the last known address of the lessee and to which the lessee has failed to respond within one year the contents shall be deemed to be abandoned.

237. (1) A credit union which holds any of the property specified in section 236 shall within ninety days after the end of its financial year report such holdings to the Registrar, and subsequently pay or deliver to the Registrar all property presumed to be abandoned listed in the report in accordance with Regulations made by the Minister.

(2) On paying or delivering the property identified in subsection (1) into the custody of the Registrar a credit union is relieved of all liability to the extent of the value of the property for any claim in that respect.

(3) Within thirty days after the end of its financial year but before the filing of the report to the Registry required by subsection (1), a credit union shall publish in the *Gazette* and a newspaper circulating in Dominica the name of the owner and particulars concerning the property and shall mail a notice to the owner at his last known address containing particulars concerning the property.

238. (1) A credit union may sell at a public sale all property, other than money presumed to be abandoned after the expiration of sixty days from the later date of publication or mailing required by section 237(3) following the advertisement of the sale as the Minister may authorise.

(2) A purchaser shall receive title to the property free from all claims of the owner or prior holder and from all persons claiming through or under him.

Report, publication and disposal of abandoned property.

Sale and handling of proceeds of sale of abandoned property.

(3) A credit union shall deposit with the Registrar the proceeds of the sale of property in accordance with subsection (1) less all reasonable costs incurred by it in connection with the sale, mailing of notices, and services as it considers appropriate to assure the prompt payment of claims which may subsequently be made and approved by the Minister.

(4) Any property remaining unsold shall be delivered to the Registrar and shall be disposed of by the Registrar in such manner as the Minister may direct.

239. (1) Any person claiming an interest in any property which has been paid to, or delivered into the custody of the Registrar or in the proceeds from the sale of the property may file a claim, with the Registrar and, after the person is given a hearing the decision of which shall be communicated to the claimant and made a public record, the Registrar may deliver up the property or make payment.

(2) Any person aggrieved by a decision of the Registrar may commence an action in the Court to establish his claim within thirty days following the decision of the Registrar.

240. (1) A credit union shall not willfully fail to file the report or to pay or deliver property presumed to be abandoned into the custody of the Registrar in accordance with section 237(1) or 238(4).

(2) A credit union who contravenes subsection (1) commits an offence, and it and each of its directors are liable on summary conviction to a fine not exceeding one thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding three months or to both such fine and imprisonment.

Claims on abandoned property.

Penalties for failure to file abandoned property.

PART XVIII MISCELLANEOUS

241. In this Part - "duplicate originals" means the two copies of the bye-laws or statements required in section 242; "statement" means a special resolution stating an intent to dissolve mentioned in section 165.

242. (1) Where this Act requires that bye-laws or a statement relating to a co-operative society shall be sent to the Registrar, unless otherwise specifically provided, the co-operative society shall send three copies of the bye-laws or statement signed by a director or an officer of the co-operative society.

(2) Subject to the other provisions of this Act, where the Registrar receives duplicate originals of any bye-laws or statement under subsection (1) and they are accompanied by any other required documents and the prescribed fees, the Registrar shall-

(a) endorse on each of the duplicate originals the word "Registered" and the date of the registration;

(b) issue in duplicate the appropriate certificate and attach to each certificate one of the duplicate originals of the bye-laws or statements;

(c) file a copy of the certificate and attached byelaws or statement;

(d) send to the co-operative society the original certificate and attached bye-laws or statement; and

(e) publish in the *Gazette* notice of the issue of the certificate. Interpretation.

Execution and filing.

(3) The Registrar may date a certificate mentioned in subsection (2) as of the day it receives the bye-laws or statement issued under which the certificate is issued or as of any later day specified by the person who signed the bye-laws or statement.

(4) A signature required on a certificate mentioned in subsection (2) may be printed or otherwise mechanically produced.

243. Where a notice or document is required by this Act or the Regulations to be sent, the sending of the notice or document may be waived or the time for sending the notice or document may be waived or abridged at any time with the consent in writing of the person entitled to receive the notice or document.

244. (1) A director or officer of a co-operative society may-

(a) sign a certificate stating any fact set out in; or

(b) certify a copy of the whole or any part of, the bye-laws, or any other contract to which the co-operative society is party or the minutes of a meeting of the directors, a committee of directors or the members.

(2) A certificate or certified copy described in subsection (1) is admissible in evidence as prima facie proof of the facts contained in the certificate or certified copy without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the certificate or the certification.

245. (1) Where a notice or document is required to be sent to the Registrar under this Act, the Registrar may accept a photostatic or photographic copy of the notice or document.

(2) A person is not affected by, or presumed to have notice or knowledge of, the contents of a document concerning a co-operative society by reason only that the document has been filed with the Registrar or is available for inspection at any office of the co-operative society.

Waiver of notice.

Certificate of cooperative society.

Document.

246. Where the Registrar is authorised to do so by the person who sent a notice or document or his or her representative, the Registrar may alter the notice or document, but it may not alter an affidavit or statutory declaration.

247. (1) Where there is an error in the bye-laws, a notice, a certificate or any other document, the directors or members shall on the request of the Registrar-

(a) pass any necessary resolutions;

(b) send to the Registrar the relevant documents required to comply with this Act; and

(c) take any other steps that the Registrar may reasonably require, in order that the Registrar may correct the bye-laws, notice, certificate or document.

(2) Before making a correction under subsection (1), the Registrar shall be satisfied that the correction would not prejudice any of the members or creditors of the co-operative society.

(3) The Registrar may, at the request of a co-operative society or of any other interested person, accept a corrected version of any of the documents referred to in subsection (1) if-

(a) the correction is approved by the directors of the co-operative society; and

(b) the Registrar is satisfied that the correction would not prejudice any of the members or creditors of the co-operative society.

(4) If in the view of-

(a) the Registrar;

(b) the co-operative society; or

(c) any interested person,
Alteration.

Rectification and correction. a correction to any of the documents referred to in subsection (1) above would prejudice a member or a creditor of the co-operative society, the Registrar, the co-operative society or the person may apply to the Court for an order that the document be corrected and for an order determining the rights of the members or creditors.

(5) An applicant under subsection (4) shall give the Registrar notice of the application, and the Registrar shall be entitled to appear and to be heard and represented by a member of the staff of the Registrar or by an attorney-at-law.

(6) A corrected document shall bear the date of document it replaces.

(7) If a corrected certificate materially amends the terms of the original certificate, the Registrar shall without delay give notice of the correction in the Gazette and in a newspaper published and circulated in Dominica.

(8) The Registrar may on its own initiative correct any—

(a) linguistic error;

(b) error of transcription;

(c) clerical error; or

(d) mistake where the error is made by the Registrar or where the error is not substantive in nature.

248. (1) A co-operative society registered under this Act is exempt from any stamp duty, taxes and fees, with which, under any law for the time being in force, instruments executed by or on behalf of such co-operative society or by an officer or member and relating to the business of such co-operative society, or any class of such instruments, are respectively chargeable.

(2) Notwithstanding the provisions of any other law in force in Dominica, a co-operative society shall be exempt from Exemption from stamp duty and other taxes. the payment of income tax, corporation tax and any other tax on the incomes of such co-operative society.

(3) Notwithstanding the provisions of any other law in force in Dominica providing for the payment of customs duties, consumption taxes, excise taxes, environmental levy or customs service charge, the Minister in Cabinet may by Order published in the *Gazette*, exempt a society registered pursuant to this Act from liability to customs duties, consumption taxes, excise taxes, environmental levy or customs service charge on goods imported by the society.

249. Except as is expressly provided in this Act, a civil court shall not have any jurisdiction in respect of any matter concerned with the dissolution of a co-operative society under this Act.

250. (1) A copy of any entry in a book or other document that is required to be kept by this Act shall, if certified by the Registrar be received in any legal proceedings, civil or criminal, as prima facie evidence of the existence of such entry and shall be admitted as evidence of the matters, transactions and accounts therein recorded in every case where, and to the same extent as, the original entry itself is admissible.

(2) An officer of a co-operative society shall not, in any legal proceedings to which the co-operative society is not a party, be compelled to produce any of the co-operative society's books, the content of which can be proved under subsection (1), or to appeal as a witness to prove any matters, transactions or accounts therein recorded, unless the Court for special reasons so directs.

251. The Registrar or any other person exercising a function under this Act, shall not be liable in damages for anything done or omitted in the discharge or purported discharge of their respective functions under this Act or under the Regulations unless it is shown that the act or omission was in bad faith.

Limitation of jurisdiction.

Proof of entries in books and other documents. Immunity of Registrar and staff.

252. (1) For the purpose of carrying out this Act, the Minister may make Regulations-

(a) defining, enlarging or restricting the meaning of any word used but not defined in this Act;

(b) requiring the payment of and prescribing the amount of any fee with respect to-

(i) the filing, examination or copying of any document; or

(ii) any action that the Registrar is required or authorised to take under this Act;

(c) prescribing the procedure for appeals to the Registrar;

(d) prescribing business in which co-operative societies or any class of co-operative societies may not engage without the prior approval of the

Registrar;

(e) exempting any co-operative society or class of co-operative societies from any provision of this Act;

(f) prescribing any other matter or thing required or authorised to be prescribed by this Act; and

(g) generally for giving effect to and for the efficient operation of the Act.

(2) Regulations under this Act may-

(a) make different provision in relation to different cases or circumstances;

(b) apply in respect of particular persons or particular cases or particular classes of persons or particular classes of cases, and define a class by reference to any circumstances whatsoever; and Regulations.

(c) contain such transitional, consequential, incidental or supplementary provisions as appear to the Minister to be necessary or expedient for the purposes of the regulations.

PART XVIII TRANSITIONAL

253. In this Part "the former Act" means the Co-operative Societies Act, 1996.

254. (1) The directors and officers of co-operative societies in existence on the coming into force of this Act shall continue to hold office in accordance with the former Act and the bye-laws of the co-operative society.

(2) Where new directors of a co-operative society are to be elected after the coming into force of this Act, such directors shall be elected in accordance with this Act.

255. All co-operative societies which prior to the coming into force of this Act were duly registered or deemed to be registered under the former Act shall be taken to be registered under this Act, and-

(a) the bye-laws of a co-operative society, including any amendments of those bye-laws, as registered under the former Act, shall be taken as if registered under this Act;

(b) a register kept in accordance with the requirements of the former Act shall be taken to be part of the corresponding register to be kept under this Act;

(c) a document referring to a provision of the former Act shall be construed as referring to the corresponding provision of this Act; and Interpretation.

Act No. 15 of 1996.

Existing directors and officers.

Co-operative societies, etc. registered under the former Act.

(d) all orders, directions, appointments and other acts lawfully made or done under a provision of the former Act and in force immediately before the coming into force of this Act shall be taken to have been made or done under the corresponding provisions of this Act and shall continue to have effect accordingly.

256. (1) Subject to subsection (2), the former Act is repealed.

(2) All rules, regulations and bye-laws made under the former Act shall continue in force with any necessary amendments and shall be taken as having been made under this Act until such time as new rules and regulations and bye-laws are made.

(3) Notwithstanding subsection (1), where a co-operative society is being dissolved or liquidated under the former Act, that Act shall continue to apply to that co-operative society and its dissolution or liquidation.

SCHEDULE

CONSTITUTION AND PROCEDURE OF THE COOPERATIVE SOCIETIES APPEALS TRIBUNAL

PART 1

Constitution

1. The Co-operative Societies Appeals Tribunal shall consist of three persons, one of whom shall be an attorney-at-law of at least five years standing who shall be the Chairperson of the Tribunal.

2. The members of the Tribunal shall be appointed by the Minister, after consultation with the apex body, for a period of not more than three years and shall be eligible for re-appointment.

Repeal.

Section 197.

Membership.

Appointment.

3. A member may at any time resign his membership by notice in writing to the Minister.

4. (1) If the Minister is satisfied that a member—

(a) has been incapacitated by physical or mental illness; or

(b) is otherwise unable or unfit to discharge the functions of a member; the Minister may by notice published in the Gazette, declare the office of the member to be vacant and thereupon, the office shall become vacant.

(2) In case of the temporary absence or inability of a member to act, the Minister may appoint a suitable person to act in that member's place.

5. The Minister shall publish in the Gazette notice of the appointment and cessation of appointment of a member.

6. The members of the Tribunal shall receive such remuneration as the Minister may prescribe.

7. The validity of any proceedings of the Tribunal shall not be affected by any vacancy among the members or any defect in the appointment of a member.

8. Subject to this Schedule, the Tribunal shall regulate its own procedure and may make rules for that purpose.

PART 2

Procedure

1. (1) An appeal to the Tribunal shall be by notice in writing, and sent or delivered to the chairperson of the Tribunal.

Resignation.

Inability.

Publication.

Remuneration

Validity of proceedings.

Rules.

Initial Procedure.

(2) On receipt of a notice of appeal, the chairperson shall send a copy thereof to the other members of the Tribunal.

(3) The chairperson of the Tribunal may appoint a secretary and such other officers as he thinks fit for the purposes of the appeal.

2. (1) The appellant shall, within 14 days of the lodging of the notice of appeal, provide to the chairperson of the Tribunal a written statement setting out the facts and grounds on which the appeal is based and a copy of such statement shall be forwarded by the chairperson of the Tribunal to the Registrar and, if the appeal is against a decision of an arbitrator, to the arbitrator, and, if the appellant is not a co-operative society, to the co-operative society of which the appellant is a member, and if the appeal is against the decision of the Registrar or an arbitrator in a dispute, to any other party to the dispute.

(2) A person or co-operative society to whom a copy of the appellant's statement has been provided shall, within 14 days of the receipt by him of the statement, submit to the chairperson of the Tribunal a written response to the statement, and a copy of such response shall be sent by the chairperson of the Tribunal to the appellant and to any other person interested in the appeal of whom he or she has notice.

(3) The chairperson shall send copies of all statements and responses to the other members of the Tribunal as soon as he or receives them.

3. On application by any person interested in the appeal to whom a copy of the written statement of the appellant or of the response has been sent, or in any case where the chairperson of the Tribunal considers it necessary to do so for the proper resolution of the appeal, the chairperson may require the appellant or any other person to provide him or her with further particulars in writing within such time as the chairperson may direct and the Statements to be provided. Further particulars. chairperson, on receipt of such particulars shall provide copies of such particulars to the other interested parties and to the other members of the Tribunal.

4. The chairperson of the Tribunal shall, in consultation with the other members of the Tribunal, fix a date and place for the hearing of the appeal and shall give not less than 7 days' notice thereof to the appellant, the Registrar and any other interested party.

5. (1) At a hearing before the Tribunal, the appellant, the Registrar and any other interested party shall be entitled to appear and to be heard and represented by an attorney-at-law or, in the case of the Registrar, by a member of the Registrar's staff.

(2) The Tribunal may admit any duly authenticated written statement or other material as prima facie evidence of any fact or facts in any case in which it thinks it just and proper so to do.

(3) The Tribunal may, if it thinks fit, call for such documents and examine such witnesses as appear to it likely to afford evidence relevant and material to the enquiry.

(4) The Tribunal may require any party to the enquiry or any witness in the proceedings to give evidence on oath and, for that purpose, the chairperson of the Tribunal shall have power to administer an oath.

(5) If, after notice of a hearing has been duly given, the appellant, the Registrar or any other interested party fails to appear at the hearing, the Tribunal may proceed with its enquiry into the appeal notwithstanding the absence of all or any of them, or may give such directions with a view to the determination of the appeal as the Tribunal thinks just and proper.

(6) Proceedings of the Tribunal shall be held in public.

Notice of hearing.

Procedure at hearing.

6. (1) The decision on any matter of the majority of the Tribunal shall be the decision of the Tribunal, and the decision of the Tribunal shall be recorded in writing and signed by the chairperson of the Tribunal, who may correct in any decision any clerical mistake or error arising from an accidental slip or omission.

(2) A copy of the decision, signed as aforesaid, shall be sent by the chairperson of the Tribunal, as soon as may be practicable, to the appellant, the Registrar and any other interested party.

(3) The Tribunal may, on the application of any person, award costs to any party to an appeal in such amount as the Tribunal shall assess at the hearing.

7. Save as otherwise expressly provided by this Act, the procedure at any hearing before the Tribunal shall be such as the Tribunal may determine.

8. The production in any proceedings in any court of a document purporting to be certified by the secretary as a copy of a decision of the Tribunal shall, unless the contrary is proved, be sufficient evidence of the document and the facts stated therein.

Passed in the House of Assembly this 17th day of March, 2011

DOREEN FABIEN (Mrs.)

Clerk of the House of Assembly (Ag.)

Decision of Tribunal.

General provision as to procedure.

Proof of decisions of the Tribunal.

DOMINICA

Printed by the Government Printer at the Government Printery, Roseau

4.14. ECUADOR

- **ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**

TÍTULO VI - RÉGIMEN DE DESARROLLO

Capítulo primero

Principios generales

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución.
2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable.

Capítulo cuarto

Soberanía económica

Sección primera

Sistema económico y política económica

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.

Sección octava

Sistema financiero

Art. 311.- El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria.

Capítulo sexto

Trabajo y producción

Sección primera

Formas de organización de la producción y su gestión

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas.

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional.

Sección segunda

Tipos de propiedad

Art. 321.- El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental.

• LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO

Registro Oficial N° 444 - Martes 10 de Mayo del 2011

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Oficio N° T.4887-SNJ-11-664
Quito, 28 de abril de 2011

Mediante oficio N° PAN-FC-011-511 de abril 14 del presente año, el arquitecto Fernando Cordero Cueva, Presidente de la Asamblea Nacional, puso a consideración del señor Presidente de la República el Proyecto de "LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO".

Dicho proyecto fue sancionado por el Primer Mandatario el día 28 de abril de 2011, por lo que, conforme a lo dispuesto en los artículos 137 de la Constitución de la República y 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, remito a usted la mencionada ley en original, en copia certificada, así como el certificado de discusión, para su correspondiente promulgación en el Registro Oficial.

Adicionalmente, agradeceré a usted que, una vez realizada la respectiva publicación, se sirva remitir el ejemplar original a la Asamblea Nacional para los fines pertinentes.

Atentamente,

Dr. Alexis Mera Giler, Secretario Nacional jurídico.
REPÚBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL
CERTIFICACIÓN

En mi calidad de Secretario General de la Asamblea Nacional, certifico que el proyecto de LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO,

fue discutido y aprobado en las siguientes fechas:

PRIMER DEBATE: 05-abril-2011

SEGUNDO DEBATE: 13-abril-2011

Quito, 14 abril del 2011

Dr. Andrés Segovia S., Secretario General..

REPÚBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL EL PLENO

Considerando:

Que, el artículo 283 de la Constitución de la República, establece que el sistema económico es social y solidario y se integra por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria y las demás que la Constitución determine, la economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios;

Que, el artículo 309 de la Constitución de la República señala que el sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado y del popular y solidario;

Que, el artículo 311 de la misma Constitución señala que el sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro y que las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidaria y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria;

Que, el artículo 319 de la Constitución de la República establece que se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresas públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas;

Que, el artículo 394 de la Constitución de la República garantiza la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional y la promoción del transporte público masivo y que, históricamente, la prestación de este tipo de servicio, se ha efectuado a través de cooperativas;

Que, el Ministro de Finanzas de conformidad con el artículo 74 numeral 15 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, mediante oficio N. 071-SCM-MF-2011 0520 de 24 de febrero de 2011, emite dictamen favorable del proyecto de Ley de la Economía Popular y Solidaria y se ratifica mediante oficio N. 116-SCM-MF-2011 0694 de 16 de marzo de 2011;

Que, de conformidad con el artículo 84 de la Constitución de la República, la Asamblea Nacional tiene la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución, para garantizar la dignidad del ser humano, de las comunidades, pueblos y nacionalidades;

Que, el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República establece como atribución de la Función Legislativa la de expedir, codificar, reformar, derogar leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide la siguiente:

LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO

Título I - Del Ámbito, Objeto y Principios

Artículo 1.- Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular y Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad,

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital.

Artículo 2.- Ámbito.- Se rigen por la presente ley, todas las personas naturales y jurídicas, y demás formas de organización que, de acuerdo con la Constitución, conforman la economía popular y solidaria y el sector Financiero Popular y Solidario; y, las instituciones públicas encargadas de la rectoría, regulación, control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento.

Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a las formas asociativas gremiales, profesionales, laborales, culturales, deportivas, religiosas, entre otras, cuyo objeto social principal no sea la realización de actividades económicas de producción de bienes o prestación de servicios.

Tampoco serán aplicables las disposiciones de la presente Ley, a las mutualistas y fondos de inversión, las mismas que se regirán por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y Ley de Mercado de Valores, respectivamente.

Artículo 3.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto:

- a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores de la economía y con el Estado;
- b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay;
- c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario;
- d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y organizaciones sujetas a esta ley; y,
- e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, fomento y acompañamiento.

Artículo 4.- Principios.- Las personas y organizaciones amparadas por esta ley, en el ejercicio de sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, según corresponda:

- a) La búsqueda del buen vivir y del bien común;
- b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales;
- c) El comercio justo y consumo ético y responsable;
- d) La equidad de género;
- e) El respeto a la identidad cultural;
- f) La autogestión;
- g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y,
- h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes.

Artículo 5.- Acto Económico Solidario.- Los actos que efectúen con sus miembros las organizaciones a las que se refiere esta Ley, dentro del ejercicio de las actividades propias de su objeto social, no constituyen actos de comercio o civiles sino actos solidarios y se sujetarán a la presente Ley.

Artículo 6.- Registro.- Las personas y organizaciones amparadas por esta Ley, deberán inscribirse en el Registro Público que estará a cargo del ministerio de Estado que tenga a su cargo los registros sociales. El registro habilitará el acceso a los beneficios de la presente Ley.

Artículo 7.- Glosario.- Para los fines de la presente Ley, se aplicarán las siguientes denominaciones:

- a) Organizaciones del sector asociativo, como "asociaciones";
- b) Organizaciones del sector cooperativista, como "cooperativas";
- c) Comité Interinstitucional de la Economía Popular y Solidaria y del sector Financiero Popular y Solidario, como "Comité Interinstitucional";
- d) Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, como "Superintendencia";
- e) Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, como "Instituto";
- f) Junta de Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario, como "Junta de Regulación" y,
- g) Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, como "Corporación".

Título II De la Economía Popular y Solidaria

Capítulo I - De las Formas de Organización de la Economía Popular y Solidaria

Artículo 8.- Formas de Organización.- Para efectos de la presente Ley, integran la Economía Popular y Solidaria las organizaciones conformadas en los Sectores Comunitarios, Asociativos y Cooperativistas, así como también las Unidades Económicas Populares.

Artículo 9.- Personalidad Jurídica.- Las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria se constituirán como personas jurídicas, previo el cumplimiento de los requisitos que contemplará el Reglamento de la presente Ley.

La personalidad jurídica se otorgará mediante acto administrativo del Superintendente que se inscribirá en el Registro Público respectivo.

Las organizaciones en el ejercicio de sus derechos y obligaciones actuarán a su nombre y no a nombre de sus socios.

En el caso de las cooperativas, el procedimiento de constitución, los mínimos de socios y capital social, serán fijados en el Reglamento de esta Ley, tomando en cuenta la clase de cooperativa, el vínculo común de sus socios y el ámbito geográfico de sus operaciones.

Artículo 10.- Capital de riesgo y organizaciones mixtas.- El Estado Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados participarán en la conformación de capitales de riesgo y de organizaciones mixtas de economía popular y solidaria a través de mecanismos legales y financieros idóneos. El carácter temporal de las inversiones efectuadas por el Estado deberá ser previamente acordado, tanto en tiempo cuanto en forma; privilegiando los procesos de desinversión del Estado en organizaciones donde es o será miembro, asociado o socio en forma parcial, a favor de la y las comunidades en cuyos territorios tales emprendimientos se desarrollen, dentro de las condiciones y plazos establecidas en cada proyecto.

Artículo 11.- Competencia desleal.- Los miembros, asociados y socios, bajo pena de exclusión, no podrán competir con la organización a que pertenezcan, realizando la misma actividad económica que ésta, ni por sí mismos, ni por intermedio de terceros.

Artículo 12.- Información.- Para ejercer el control y con fines estadísticos las personas y organizaciones registradas presentarán a la Superintendencia, información periódica relacionada con la situación económica y de gestión, de 6

acuerdo con lo que disponga el Reglamento de la presente Ley y cualquier otra información inherente al uso de los beneficios otorgados por el Estado.

Artículo 13.- Normas contables- Las organizaciones, sujetas a esta Ley se someterán en todo momento a las normas contables dictadas por la Superintendencia, independientemente de la aplicación de las disposiciones tributarias existentes.

Artículo 14- Disolución y Liquidación- Las organizaciones se disolverán y liquidarán por voluntad de sus integrantes, expresada con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, y por las causales establecidas en la presente Ley y en el procedimiento estipulado en su estatuto social.

Los resultados de la disolución y liquidación, en forma documentada, se pondrán en conocimiento de la Superintendencia, a fin de proceder a la cancelación de su registro público. La Superintendencia podrá supervisar la disolución y liquidación de las organizaciones.

Sección 1 - De las Organizaciones del Sector Comunitario

Artículo 15.- Sector Comunitario.- Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el trabajo conjunto, tienen por objeto la producción, comercialización, distribución y el consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y auto gestionada, bajo los principios de la presente Ley.

Artículo 16.- Estructura interna.- Las organizaciones del Sector Comunitario adoptarán, la denominación, el sistema de gobierno, control interno y representación que mejor convenga a sus costumbres, prácticas y necesidades, garantizando su modelo de desarrollo económico endógeno desde su propia conceptualización y visión.

Artículo 17.- Fondo Social.- Para el cumplimiento de sus objetivos, las organizaciones del Sector Comunitario, contarán con un fondo social variable y constituido con los aportes de sus miembros, en numerario, trabajo o bienes, debidamente evaluados por su máximo órgano de gobierno. También formarán parte del fondo social, las donaciones, aportes o contribuciones no reembolsables y legados que recibieren estas organizaciones.

En el caso de bienes inmuebles obtenidos mediante donación, éstos no podrán ser objeto de reparto en caso de disolución y se mantendrán con el fin social que produjo la donación.

Sección 2 - De las Organizaciones del Sector Asociativo

Artículo 18.- Sector Asociativo.- Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con actividades económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada bajo los principios de la presente Ley.

Artículo 19.- Estructura Interna.- La forma de gobierno y administración de las asociaciones constarán en su estatuto social, que preverá la existencia de un órgano de

gobierno, como máxima autoridad; un órgano directivo; un órgano de control interno y un administrador, que tendrá la representación legal; todos ellos elegidos por mayoría absoluta, y sujetos a rendición de cuentas, alternabilidad y revocatoria del mandato. La integración y funcionamiento de los órganos directivos y de control de las organizaciones del sector asociativo, se normará en el Reglamento de la presente Ley, considerando las características y naturaleza propias de este sector.

Artículo 20.- Capital Social.- El capital social de estas organizaciones, estará constituido por las cuotas de admisión de sus asociados, las ordinarias y extraordinarias, que tienen el carácter de no reembolsables, y por los excedentes del ejercicio económico.

En el caso de bienes inmuebles obtenidos mediante donación, no podrán ser objeto de reparto en caso de disolución y se mantendrán con el fin social materia de la donación.

Sección 3 - De las Organizaciones del Sector Cooperativo

Artículo 21.- Sector Cooperativo.- Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés social.

Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios establecidos en esta Ley y a los valores y principios universales del cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo.

Artículo 22.- Objeto.- El objeto social principal de las cooperativas, será concreto y constará en su estatuto social y deberá referirse a una sola actividad económica, pudiendo incluir el ejercicio de actividades complementarias ya sea de un grupo, sector o clase distinto, mientras sean directamente relacionadas con dicho objeto social.

Artículo 23.- Grupos.- Las cooperativas, según la actividad principal que vayan a desarrollar, pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito y servicios.

En cada uno de estos grupos se podrán organizar diferentes clases de cooperativas, de conformidad con la clasificación y disposiciones que se establezcan en el Reglamento de esta Ley.

Artículo 24.- Cooperativas de producción.- Son aquellas en las que sus socios se dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una sociedad de propiedad colectiva y manejada en común, tales como: agropecuarias, huertos familiares, pesqueras, artesanales, industriales, textiles.

Artículo 25.- Cooperativas de consumo.- Son aquellas que tienen por objeto abastecer a sus socios de cualquier clase de bienes de libre comercialización; tales como: de consumo de artículos de primera necesidad, de abastecimiento de semillas, abonos y herramientas, de venta de materiales y productos de artesanía.

Artículo 26.- Cooperativas de vivienda.- Las cooperativas de vivienda tendrán por objeto la adquisición de bienes inmuebles para la construcción o remodelación de viviendas u oficinas o la ejecución de obras de urbanización y más actividades vinculadas con éstas en beneficio de sus socios. En estas cooperativas la adjudicación de los bienes inmuebles se efectuará previo sorteo, en Asamblea General, una vez concluidas las obras

de urbanización o construcción; y, se constituirán en patrimonio familiar. Los cónyuges o personas que mantienen unión de hecho, no podrán pertenecer a la misma cooperativa.

Artículo 27.- Cooperativas de ahorro y crédito.- Estas cooperativas estarán a lo dispuesto en el Título III de la presente Ley.

Artículo 28.- Cooperativas de servicios.- Son las que se organizan con el fin de satisfacer diversas necesidades comunes de los socios o de la colectividad, los mismos que podrán tener la calidad de trabajadores, tales como: trabajo asociado, transporte, vendedores autónomos, educación y salud.

En las cooperativas de trabajo asociado sus integrantes tienen, simultáneamente, la calidad de socios y trabajadores, por tanto, no existe relación de dependencia.

Artículo 29.- Socios.- Podrán ser socios de una cooperativa las personas naturales legalmente capaces o las personas jurídicas que cumplan con el vínculo común y los requisitos establecidos en el reglamento de la presente Ley y en el estatuto social de la organización. Se excepcionan del requisito de capacidad legal las cooperativas estudiantiles.

La calidad de socio nace con la aceptación por parte del Consejo de Administración y la suscripción de los certificados que correspondan, sin perjuicio de su posterior registro en la Superintendencia y no será susceptible de transferencia ni transmisión.

Artículo 30.- Pérdida de la calidad de socio.- La calidad de socio de una cooperativa, se pierde por las siguientes causas:

- a) Retiro Voluntario;
- b) Exclusión;
- c) Fallecimiento; o,
- d) Pérdida de la personalidad jurídica.

Los procedimientos constarán en el Reglamento de la presente Ley y en el Estatuto Social de la cooperativa.

Artículo 31.- Reembolso de haberes.- Los socios que hayan dejado de tener esa calidad, por cualquier causa y los herederos, tendrán derecho al reembolso de sus haberes, previa liquidación de los mismos, en la que se incluirán las aportaciones para el capital, los ahorros de cualquier naturaleza, la alícuota de excedentes y otros valores que les correspondan y se deducirán las deudas del socio a favor de la cooperativa.

La cooperativa reembolsará los haberes a los ex socios o a sus herederos, en la forma y tiempo que se determine en el Reglamento de la presente Ley y el Código Civil.

Artículo 32.- Estructura Interna.- Las cooperativas contarán con una Asamblea General de socios o de Representantes, un Consejo de Administración, un Consejo de Vigilancia y una gerencia, cuyas atribuciones y deberes, además de las señaladas en esta Ley, constarán en su Reglamento y en el estatuto social de la cooperativa. En la designación de los miembros de estas instancias se cuidará de no incurrir en conflictos de intereses.

Artículo 33.- Asamblea General de Socios.- La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de la cooperativa y estará integrada por todos los socios, quienes tendrán derecho a un solo voto, sin considerar el monto de sus aportaciones y que podrá ser ejercido en forma directa o mediante delegación a otro socio. Sus decisiones y resoluciones obligan a todos los socios y a los órganos de la cooperativa.

Artículo 34.- Asamblea General de representantes.- Las cooperativas que tengan más de doscientos socios, realizarán la asamblea general a través de representantes, elegidos en un número no menor de treinta, ni mayor de cien.

Artículo 35.- Elección de representantes.- Los representantes a la Asamblea General serán elegidos por votación personal, directa y secreta de cada uno de los socios, mediante un sistema de elecciones universales, que puede ser mediante asambleas sectoriales definidas en función de criterios territoriales, sociales, productivos, entre otros, diseñado por la cooperativa y que constará en el reglamento de elecciones de la entidad; debiendo observar que, tanto la matriz, como sus agencias, oficinas o sucursales, estén representadas en función del número de socios con el que cuenten.

Artículo 36.- Prohibición para ser representante.- No podrán ser representantes a la Asamblea General:

- a) Los socios que se encontraren en proceso de exclusión;
- b) Los socios que se encuentren litigando con la cooperativa;
- c) Los socios que mantengan vínculos contractuales con la cooperativa no inherentes a la calidad de socio;
- d) Los funcionarios o empleados;
- e) Los socios que se encontraren en mora por más de noventa días con la misma cooperativa;
- f) Los cónyuges, convivientes en unión de hecho o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los representantes, vocales de los consejos, gerente y empleados de la cooperativa; y,
- g) Los que estuvieren incurso en otras prohibiciones estatutarias.

Artículo 37.- Pérdida de la calidad de representante.- El representante que incurriese en morosidad mayor a noventa días con la cooperativa o en cualquiera de las prohibiciones para tener esa calidad, perderá la misma y será reemplazado por el suplente que corresponda, por el resto del período para el cual fue elegido el representante cesante.

Artículo 38.- Consejo de Administración.- Es el órgano directivo y de fijación de políticas de la cooperativa, estará integrado por un mínimo de tres y máximo nueve vocales principales y sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General en votación secreta, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

Los vocales durarán en sus funciones el tiempo fijado en el estatuto social, que no excederá de cuatro años y podrán ser reelegidos por una sola vez.

Artículo 39.- Presidente.- El presidente del Consejo de Administración lo será también de la cooperativa y de la Asamblea General, será designado por el Consejo de Administración de entre sus miembros, ejercerá sus funciones dentro del periodo señalado en el estatuto social y podrá ser reelegido por una sola vez mientras mantenga la calidad de vocal de dicho consejo, quien tendrá voto dirimente cuando el Consejo de Administración tenga número par.

Artículo 40.- Consejo de Vigilancia.- Es el órgano de control interno de las actividades económicas que, sin injerencia e independiente de la administración, responde a la Asamblea General; estará integrado por un mínimo de tres y máximo cinco vocales principales y sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General en votación secreta, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley. Los vocales durarán

en sus funciones el tiempo fijado en el estatuto social, que no excederá de cuatro años y podrán ser reelegidos por una sola vez.

Artículo 41.- Reelección.- En las cooperativas cuyas asambleas son de representantes, para la reelección de los vocales de los consejos, los aspirantes, deberán participar en un proceso electoral previo y ser electos como representantes.

Artículo 42.- Período.- El período de duración para el ejercicio del cargo de los vocales de los consejos y auditores, regirá a partir del registro del nombramiento en la Superintendencia, hasta tanto continuarán en sus funciones los personeros cuyo período esté feneciendo

Artículo 43.- Gastos de alimentación y movilización.- Las cooperativas podrán reconocer a los representantes a la asamblea, los gastos de alimentación y movilización, que deberán constar en el presupuesto y no podrán otorgar otro tipo de beneficio.

Artículo 44.- Dietas a vocales.- Los vocales de los consejos de las cooperativas de los grupos y segmentos determinados por la Superintendencia, podrán percibir como dieta un valor mensual, de hasta cuatro salarios básicos unificados sin que exceda el diez por ciento (10%) de los gastos de administración y que, de ninguna manera afecte su capacidad financiera, que lo recibirán íntegramente si participaren en todas las sesiones realizadas en el mes o el valor proporcional al número de sesiones asistidas en relación a las convocadas; su valor será determinado en el reglamento de dietas que deberá ser aprobado por la Asamblea General, conjuntamente con los gastos de representación del presidente, todo lo cual, deberá constar en el presupuesto anual de la cooperativa.

Artículo 45.- Gerente.- El gerente es el representante legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa, será designado por el Consejo de Administración, siendo de libre designación y remoción y será responsable de la gestión y administración integral de la misma, de conformidad con la Ley, su Reglamento y el estatuto social de la cooperativa. En los segmentos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito determinados por la Superintendencia, será requisito la calificación de su Gerente por parte de esta última. En caso de ausencia temporal le subrogará quien designe el Consejo de Administración, el subrogante deberá cumplir con los mismos requisitos exigidos para el titular.

Artículo 46.- Modalidad de contratación.- La modalidad de contratación del gerente general será de conformidad con el Código Civil.

Artículo 47.- Atribuciones de los Órganos Internos.- Las atribuciones y deberes de la Asamblea General, de los Consejos de Administración y Vigilancia, del Presidente y Gerente, constan en la presente Ley y en su reglamento, sin perjuicio de las que se determinen en los estatutos sociales.

Artículo 48.- Patrimonio.- El patrimonio de las cooperativas estará integrado por el capital social, el Fondo Irrepartible de Reserva Legal y otras reservas estatutarias y constituye el medio económico y financiero a través del cual la cooperativa puede cumplir con su objeto social.

Artículo 49.- Capital social.- El capital social de las cooperativas será variable e ilimitado, estará constituido por las aportaciones pagadas por sus socios, en numerario, bienes o trabajo debidamente valuados por el Consejo de Administración.

Las aportaciones de los socios estarán representadas por certificados de aportación, nominativos y transferibles entre socios o a favor de la cooperativa. Cada socio podrá tener aportaciones de hasta el equivalente al cinco por ciento (5%) del capital social en las cooperativas de ahorro y crédito y hasta el diez por ciento (10%) en los otros grupos.

Artículo 50.- Fondo Irrepartible de Reserva Legal.- El Fondo Irrepartible de Reserva Legal lo constituyen las cooperativas para solventar contingencias patrimoniales, se integrará e incrementará anualmente con al menos el cincuenta por ciento (50%) de las utilidades y al menos el cincuenta por ciento (50%) de los excedentes anuales obtenidos por la organización. No podrá distribuirse entre los socios, ni incrementar sus certificados de aportación, bajo ninguna figura jurídica, y podrá ser distribuido exclusivamente al final de la liquidación de la cooperativa de acuerdo con lo que resuelva la Asamblea General. También formarán parte del Fondo Irrepartible de Reserva Legal, las donaciones y legados, efectuados en favor de la cooperativa.

Artículo 51.- Otras reservas.- Las cooperativas podrán, a más de la reserva legal, crear las reservas que, por la naturaleza de la entidad, considere necesarias.

Artículo 52.- Utilidades.- Para efectos de la presente Ley se definen como utilidades todos los ingresos obtenidos en operaciones con terceros, luego de deducidos los correspondientes costos, gastos y deducciones adicionales, conforme lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 53.- Excedentes.- Son los valores sobrantes o remanentes obtenidos por las cooperativas en las actividades económicas realizadas con sus socios, una vez deducidos los correspondientes costos, gastos y deducciones adicionales, conforme lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 54.- Distribución de utilidades y excedentes.- Las utilidades y excedentes, en caso de generarse se distribuirán de la siguiente manera:

- a) Por lo menos el cincuenta por ciento (50%) se destinará al incremento del Fondo Irrepartible de Reserva Legal;
- b) Hasta el cinco por ciento (5%) como contribución a la Superintendencia, según la segmentación establecida; y,
- c) El saldo se destinará a lo que resuelva la Asamblea General.

Artículo 55.- Emisión de Obligaciones.- Las cooperativas podrán emitir obligaciones de libre negociación, de acuerdo con las regulaciones del mercado de valores y las que dicte el regulador previsto en esta Ley, en cuanto a redención, intereses y una participación porcentual en las utilidades o excedentes, obligaciones que no conceden a sus poseedores, la calidad de socios, derecho de voto, ni participación en la toma de decisiones en la cooperativa.

Artículo 56.- Fusión y Escisión.- Las cooperativas de la misma clase podrán fusionarse o escindirse por decisión de las dos terceras partes de los socios o representantes, previa aprobación de la Superintendencia.

La expresión de voluntad por escrito de los socios que no estuvieren de acuerdo con la fusión o escisión, se considerará como solicitud de retiro voluntario y dará derecho a la liquidación de los haberes.

Artículo 57.- Disolución.- Las cooperativas podrán disolverse, por las siguientes causas:

- a) Vencimiento del plazo de duración establecido en el estatuto social de la cooperativa;
- b) Cumplimiento de los objetos para las cuales se constituyeron;
- c) Por sentencia judicial ejecutoriada;
- d) Decisión voluntaria de la Asamblea General, expresada con el voto secreto de las dos terceras partes de sus integrantes; y,
- e) Por resolución de la Superintendencia, en los siguientes casos:
 - 1. Violación de la Ley, su Reglamento o de los estatutos sociales, que pongan en riesgo su existencia o causen graves perjuicios a los intereses de sus socios o de terceros;
 - 2. Deterioro patrimonial que ponga en riesgo la sostenibilidad de la organización o la continuidad en sus operaciones o actividades;
 - 3. La inactividad económica o social por más de dos años;
 - 4. La incapacidad, imposibilidad o negativa de cumplir con el objetivo para el cual fue creada;
 - 5. Disminución del número de sus integrantes por debajo del mínimo legal establecido;
 - 6. Suspensión de pagos, en el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito; y,
 - 7. Las demás que consten en la presente Ley, su Reglamento y el estatuto social de la cooperativa.

Artículo 58.- Inactividad.- La Superintendencia, a petición de parte o de oficio, podrá declarar inactiva a una cooperativa que no hubiere operado durante dos años consecutivos. Se presume esta inactividad cuando la organización no hubiere remitido los balances o informes de gestión correspondientes.

Para las Cooperativas de Ahorro y Crédito la Superintendencia fijará el tiempo y las causas para declarar la inactividad.

La resolución que declare la inactividad de una cooperativa, será notificada a los directivos y socios, en el domicilio legal de la cooperativa, a más de ello mediante una publicación en medios de comunicación escritos de circulación nacional. 17

Si la inactividad persiste por más de tres meses desde la publicación, la Superintendencia podrá declararla disuelta y disponer su liquidación y cancelación del Registro Público.

Artículo 59.- Reactivación.- La Superintendencia podrá resolver la reactivación de una cooperativa que se encontrare en proceso de liquidación, siempre que se hubieren superado las causas que motivaron su disolución y cuando se cumplan los requisitos previstos en la Ley y su reglamento.

Artículo 60.- Liquidación.- Salvo en los casos de fusión y escisión, una vez disuelta la cooperativa se procederá a su liquidación, la cual consiste en la extinción de las obligaciones de la organización y demás actividades relacionadas con el cierre; para cuyo efecto, la cooperativa conservará su personalidad jurídica, añadiéndose a su razón social, las palabras "en liquidación".

Artículo 61.- Designación de Liquidador.- El liquidador será designado por la Asamblea General cuando se trate de disolución voluntaria y por la Superintendencia cuando sea ésta la que resuelva la disolución.

El liquidador ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa, pudiendo realizar únicamente aquellas actividades necesarias para la liquidación.

Cuando el liquidador sea designado por la Superintendencia, ésta fijará sus honorarios, que serán pagados por la cooperativa y cuando sea designado por la Asamblea General de la cooperativa, será ésta quien fije sus honorarios.

Los honorarios fijados por la Superintendencia, se sujetarán a los criterios que constarán en el Reglamento de la presente Ley. El liquidador no tendrá relación laboral con la Superintendencia, ni con la cooperativa y será de libre remoción, sin derecho a indemnización alguna.

Artículo 62.- Prohibiciones.- El liquidador no podrá realizar nuevas operaciones relativas al objeto social, así como tampoco adquirir, directa o indirectamente, los bienes de la cooperativa. Esta prohibición se extiende al cónyuge, conviviente en unión de hecho y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Artículo 63.- Procedimiento de Liquidación.- El procedimiento de liquidación, que incluirá la designación de la Junta de Acreedores y otros aspectos relacionados, se determinará en el reglamento a la presente Ley.

Artículo 64.- Saldo del activo.- Una vez concluido el proceso de liquidación de la cooperativa, el saldo del activo, si lo hubiere, se destinará a los objetivos previstos en el estatuto social o resueltos por la Asamblea General y se cancelará su inscripción en el Registro Público.

Artículo 65.- Inspección previa.- La Superintendencia, antes de disponer la intervención de una cooperativa, realizará una inspección, previa notificación, con el propósito de establecer la existencia de causales que motiven la intervención.

El informe de inspección será dado a conocer a la cooperativa, con la finalidad que justifique o solucione las observaciones, dentro del plazo que para el efecto fije la Superintendencia.

Artículo 66.- Regularización.- La Superintendencia en base del informe, y en caso de incumplimiento o no justificación de las observaciones a que se refiere el artículo anterior, podrá disponer el cumplimiento de un plan de regularización por un plazo adicional no mayor a ciento ochenta días.

Artículo 67.- Intervención.- La intervención es el proceso a través del cual el Estado asume temporal y totalmente, la administración de la cooperativa para subsanar graves irregularidades que atenten contra la estabilidad social, económica y financiera de la entidad.

La Superintendencia podrá resolver la intervención de una cooperativa cuando no haya cumplido el plan de regularización o por los casos determinados en la Ley

Artículo 68.- Causas de intervención.- La Superintendencia podrá resolver la intervención de las cooperativas por las siguientes causas:

- a) Violación de las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y las regulaciones que puedan provocar un grave riesgo al funcionamiento de la cooperativa y a los derechos de los socios y de terceros;
- b) Realización de actividades diferentes a las de su objeto social o no autorizadas por la Superintendencia;
- c) Incumplimiento reiterado en la entrega de la información requerida por la Ley y la Superintendencia u obstaculizar la labor de ésta;
- d) Uso indebido de los recursos públicos que recibieren, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar;

- e) Por solicitud de socios o representantes de al menos el veinte y cinco por ciento (25%) del total, manifestando que han sufrido o se hallen en riesgo de sufrir grave perjuicio;
- f) Por incumplimiento o violación de la Ley, su Reglamento o el estatuto social de la cooperativa, en que hubieren incurrido ésta o sus administradores; y,
- g) Utilización de la organización, con fines de elusión o evasión tributaria, propia de sus socios o de terceros.

Artículo 69.- Interventor.- La Superintendencia nombrará en la misma resolución de intervención al Interventor, quien ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa.

La intervención conlleva la separación automática de los vocales de los consejos y del representante legal de la cooperativa y tendrá una duración de hasta ciento ochenta días, prorrogables, por una sola vez, hasta por noventa días adicionales.

El Interventor será un funcionario caucionado, no tendrá relación laboral con la cooperativa, ni con la Superintendencia, no obstante, el Superintendente podrá, en cualquier momento, remover al interventor, por incumplimiento de sus funciones.

Así mismo, el Superintendente podrá designar un nuevo interventor en caso de muerte, renuncia del designado o por incapacidad superviniente.

El interventor no será funcionario de la Superintendencia, ni podrá intervenir más de una cooperativa simultáneamente.

Artículo 70.- Atribuciones del interventor.- El Interventor tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la cooperativa;
- b) Realizar todos los actos y contratos tendientes a subsanar las causas que motivaron la intervención;
- c) Llevar adelante la gestión de la cooperativa para el cumplimiento de su objeto social;
- d) Presentar informes de gestión y un informe final a la Superintendencia;
- e) Convocar a asambleas generales de acuerdo a lo previsto en el estatuto social de la cooperativa;
- f) Convocar, previo a concluir la intervención, a elecciones para la designación de nuevos órganos directivos, de acuerdo con el estatuto social y la normativa interna de la entidad; y,
- g) Las demás que se fijan en el Reglamento y en la resolución de intervención.

Artículo 71.- Fin de la intervención.- La intervención terminará:

- a) Cuando se hayan superado las causas que la motivaron; y
- b) En caso de imposibilidad de solucionar los problemas que motivaron la intervención, la Superintendencia resolverá la disolución de la cooperativa y su consecuente liquidación.

Artículo 72.- Atribuciones y procedimientos.- Las atribuciones y deberes de los consejos de administración, vigilancia, presidentes y gerentes, y los procedimientos de fusión, escisión, disolución, inactividad, reactivación, liquidación e intervención, constarán en el Reglamento de la presente Ley.

Capítulo II - De las Unidades Económicas Populares

Artículo 73.- Unidades Económicas Populares.- Son Unidades Económicas Populares: las que se dedican a la economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres artesanales; que realizan actividades económicas de producción, comercialización de bienes y prestación de servicios que serán promovidas fomentando la asociación y la solidaridad. Se

considerarán también en su caso, el sistema organizativo, asociativo promovido por los ecuatorianos en el exterior con sus familiares en el territorio nacional y con los ecuatorianos retornados, así como de los inmigrantes extranjeros, cuando el fin de dichas organizaciones genere trabajo y empleo entre sus integrantes en el territorio nacional.

Artículo 74.- Las personas responsables de la Economía del Cuidado.- Para efectos de esta Ley se refiere a las personas naturales que realizan exclusivamente actividades para la reproducción y sostenimiento de la vida de las personas, con relación a la preparación de alimentos, de cuidado humano y otros.

Artículo 75.- Emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos.- Son personas o grupos de personas que realizan actividades económicas de producción, comercialización de bienes o prestación de servicios en pequeña escala efectuadas por trabajadores autónomos o pequeños núcleos familiares, organizadas como sociedades de hecho con el objeto de satisfacer necesidades, a partir de la generación de ingresos e intercambio de bienes y servicios. Para ello generan trabajo y empleo entre sus integrantes.

Artículo 76.- Comerciantes minoristas.- Es comerciante minorista la persona natural, que de forma autónoma, desarrolle un pequeño negocio de provisión de artículos y bienes de uso o de consumo y prestación de servicios, siempre que no exceda los límites de dependientes asalariados, capital, activos y ventas, que serán fijados anualmente por la Superintendencia.

Artículo 77.- Artesanos.- Es artesano el trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que desarrolla su actividad y trabajo personalmente. En caso de ser propietario de un taller legalmente reconocido, no excederá los límites de operarios, trabajo, maquinarias, materias primas y ventas, que serán fijados anualmente por la Superintendencia.

Título III - Del Sector Financiero Popular y Solidario

Capítulo I - De las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario

Artículo 78.- Sector Financiero Popular y Solidario.- Para efectos de la presente Ley, integran el Sector Financiero Popular y Solidario las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro.

Artículo 79.- Tasas de interés.- Las tasas de interés máximas activas y pasivas que fijarán en sus operaciones las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario serán las determinadas por el Banco Central del Ecuador.

Artículo 80.- Disposiciones supletorias.- Las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro, en lo no previsto en este Capítulo, se regirán en lo que corresponda según su naturaleza por las disposiciones establecidas en el Título II de la presente Ley; con excepción de la intervención que será solo para las cooperativas de ahorro y crédito.

Sección 1 - De las Cooperativas de Ahorro y Crédito

Artículo 81.- Cooperativas de ahorro y crédito.- Son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia, con clientes o terceros con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la presente Ley.

Artículo 82.- Requisitos para su constitución.- Para constituir una cooperativa de ahorro y crédito, se requerirá contar con un estudio de factibilidad y los demás requisitos establecidos en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 83.- Actividades financieras.- Las cooperativas de ahorro y crédito, previa autorización de la Superintendencia, podrán realizar las siguientes actividades:

- a) Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o modalidad autorizado;
- b) Otorgar préstamos a sus socios;
- c) Conceder sobregiros ocasionales;
- d) Efectuar servicios de caja y tesorería;
- e) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras nacionales o extranjeras;
- f) Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito para su custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de valores;
- g) Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito;
- h) Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, endosos o avales de títulos de crédito, así como por el otorgamiento de garantías, fianzas y cartas de crédito internas y externas, o cualquier otro documento, de acuerdo con las normas y prácticas y usos nacionales e internacionales;
- i) Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y del exterior;
- j) Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera de crédito hipotecaria o prenda propia o adquirida, siempre que en este último caso, se originen en operaciones activas de crédito de otras instituciones financieras;
- k) Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación de pago creados por ventas a crédito y anticipos de fondos con respaldo de los documentos referidos;
- l) Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular y Solidario, sistema financiero nacional y en el mercado secundario de valores y de manera complementaria en el sistema financiero internacional;
- m) Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; y,
- n) Cualquier otra actividad financiera autorizada expresamente por la Superintendencia.

Las cooperativas de ahorro y crédito podrán realizar las operaciones detalladas en este artículo, de acuerdo al segmento al que pertenezcan, de conformidad a lo que establezca el Reglamento de esta Ley.

Artículo 84.- Certificado de funcionamiento.- Las cooperativas de ahorro y crédito tendrán, tanto en matriz, como en sus agencias, oficinas o sucursales, la obligación de exhibir en lugar público y visible, el certificado de autorización de funcionamiento concedido por la Superintendencia.

Artículo 85.- Solvencia y prudencia financiera.- Las cooperativas de ahorro y crédito deberán mantener índices de solvencia y prudencia financiera que permitan cumplir sus obligaciones y mantener sus actividades de acuerdo con las regulaciones que se dicten para el efecto, en consideración a las particularidades de los segmentos de las cooperativas de ahorro y crédito.

Las regulaciones deberán establecer normas al menos en los siguientes aspectos:

- a) Solvencia patrimonial;
- b) Prudencia Financiera;
- c) Índices de gestión financiera y administrativa;
- d) Mínimos de Liquidez;
- e) Desempeño Social; y,
- f) Transparencia.

Artículo 86.- Cupo de créditos.- Las cooperativas de ahorro y crédito manejarán un cupo de crédito y garantías de grupo, al cual podrán acceder los miembros de los consejos, gerencia, los empleados que tienen decisión o participación en operaciones de crédito e inversiones, sus cónyuges o convivientes en unión de hecho legalmente reconocidas y sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y afinidad. El cupo de crédito para el grupo no podrá ser superior al diez por ciento (10%) ni el límite individual superior al dos por ciento (2%) del patrimonio técnico calculado al cierre del ejercicio anual inmediato anterior al de la aprobación de los créditos. Las solicitudes de crédito de las personas señaladas en este artículo serán resueltas por el Consejo de Administración. No aplicarán los criterios de vinculación por administración para las Cajas Centrales.

Artículo 87.- Órdenes de pago.- Las cooperativas de ahorro y crédito podrán emitir órdenes de pago en favor de sus socios y contra sus depósitos, que podrán hacerse efectivas en otras cooperativas similares, de acuerdo con las normas que dicte el regulador y los convenios que se suscriban para el efecto.

Igualmente podrán realizar operaciones por medios magnéticos, informáticos o similares, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de comercio electrónico vigente y las normas que dicte el regulador.

Artículo 88.- Inversiones.- Las cooperativas de ahorro y crédito, preferentemente deberán invertir en el Sector Financiero Popular y Solidario. De manera complementaria podrán invertir en el sistema financiero nacional y en el mercado secundario de valores y, de manera excepcional, en el sistema financiero internacional, en este caso, previa la autorización y límites que determine el ente regulador.

Artículo 89.- Agencias y sucursales.- Las cooperativas de ahorro y crédito para el ejercicio de sus actividades, podrán abrir sucursales, agencias u oficinas en el territorio nacional previa la autorización de la Superintendencia. Para la apertura de nuevas sucursales, agencias u oficinas se requerirá de un estudio de factibilidad que incluya un análisis de impacto económico geográfico con relación a otras existentes previamente, con la finalidad de salvaguardar las instituciones locales.

Los créditos en las sucursales, agencias u oficinas, serán otorgados preferentemente a los socios de éstas sucursales, agencias u oficinas.

Artículo 90.- Capitalización.- Las cooperativas de ahorro y crédito podrán resolver a través de la Asamblea General, capitalizaciones con nuevos aportes de los socios. Sin embargo, si la asamblea general resuelve capitalización que involucre la transferencia de ahorros o depósitos, requerirá de la autorización escrita del socio.

Artículo 91.- Redención de certificados.- Ninguna cooperativa podrá redimir el capital social, en caso de retiro de socios, por sumas que excedan en su totalidad el cinco por ciento (5%) del capital social pagado de la cooperativa, calculado al cierre del ejercicio económico anterior. La redención del capital, en caso de fallecimiento del socio, será total

y no se computará dentro del cinco por ciento (5%) establecido en el inciso anterior; la devolución se realizará conforme a las disposiciones del Código Civil.

La compensación de certificados de aportación con deudas a la cooperativa será permitida solo en caso de retiro del socio, siempre dentro del límite del cinco por ciento (5%). No se podrá redimir capital social si de ello resultare infracción a la normativa referente al patrimonio técnico y relación de solvencia o si la cooperativa se encontrare sujeta a regularización en los términos establecidos por la Superintendencia.

Artículo 92.- Administración y calificación de riesgo.- Las cooperativas de ahorro y crédito deberán contratar calificadoras de riesgo y realizar la administración integral de riesgos de acuerdo al segmento al que pertenezcan, de conformidad a lo dispuesto por el órgano regulador.

Artículo 93.- Prevención de lavado de activos.- Las cooperativas de ahorro y crédito implementarán mecanismos de prevención de lavado de activos conforme a las disposiciones constantes en la legislación vigente.

Los informes anuales de auditoría, deberán incluir la opinión del auditor, referente al cumplimiento de los controles para evitar el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas. Las organizaciones del sector financiero popular y solidario están obligadas a suministrar a las entidades legalmente autorizadas para la prevención del lavado de activos, la información en la forma y frecuencia que ellas determinen.

Artículo 94.- Información.- Las cooperativas de ahorro y crédito pondrán a disposición de los socios y público en general, la información financiera y social de la entidad, conforme a las normas emitidas por la Superintendencia.

Las organizaciones del sector financiero popular y solidario, están obligadas a suministrar a la Superintendencia, en la forma y frecuencia que ella determine, la información para mantener al día el registro de la Central de Riesgos. La Superintendencia coordinará junto con la Superintendencia de Bancos y Seguros la integración de la información de la central de riesgos.

Artículo 95.- Sigilo y Reserva.- Los depósitos y demás captaciones de cualquier índole que se realicen en las organizaciones del sector financiero popular y solidario, determinadas por la Superintendencia, excluyendo las operaciones activas, estarán sujetos a sigilo, por lo cual las instituciones receptoras de los depósitos y captaciones, sus administradores, funcionarios y empleados, no podrán proporcionar información relativa a dichas operaciones, sino a su titular o a quien lo represente legalmente.

Las organizaciones del sector financiero popular y solidario con el objeto de facilitar procesos de conciliación, darán acceso al conocimiento detallado de las operaciones anteriores y sus antecedentes a la firma de auditoría externa contratada por la institución, que también quedará sometida al sigilo bancario.

Las organizaciones del sector financiero popular y solidario podrán dar a conocer las operaciones anteriores, en términos globales, no personalizados ni parcializados, solo para fines estadísticos o de información.

Las organizaciones del sector financiero popular y solidario tendrán la obligación de proporcionar a la Superintendencia la información sobre las operaciones que determinadas por ésta, por su naturaleza y monto, requieran de un informe especial. La Superintendencia proporcionará esta información a otras autoridades que por disposición legal expresa, previa determinación sobre su causa y fines, puedan requerirla, quienes también estarán sujetas al sigilo hasta que se utilice la información en los fines para los cuales se la requirió.

Artículo 96.- Auditorías.- Las cooperativas de ahorro y crédito deberán contar con auditoría externa anual y auditoría interna, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

Los auditores internos y externos deberán ser previamente calificados por la Superintendencia, desarrollarán su actividad profesional cumpliendo la Ley y su Reglamento. Los auditores internos y externos serán responsables administrativa, civil y penalmente de los dictámenes y observaciones que emitan.

Artículo 97.- Calificación.- Los vocales de los consejos, el gerente y los auditores externo e interno, para ejercer sus funciones deberán ser calificados previamente por la Superintendencia, conforme a las disposiciones contenidas en la presente Ley y en su Reglamento.

Artículo 98.- Revocatoria de calificación.- La Superintendencia podrá revocar, en cualquier momento, la calificación de los vocales de los consejos, del gerente o de los auditores, cuando hayan incurrido en el incumplimiento de los requisitos que sustentaron su calificación.

Artículo 99.- Intervención.- Sin perjuicio de las causales de intervención establecidas en el artículo 68 de esta Ley, cuando una cooperativa de ahorro y crédito por cualquier causa no cumpliera con la ley o regulaciones en particular las referidas a las normas de solvencia y prudencia financiera o cuando se presuma la existencia de prácticas ilegales de tal magnitud que pongan en grave peligro los recursos del público o incumpliere los programas de vigilancia preventiva o de regularización establecidos por la Superintendencia, este órgano de control podrá ordenar su intervención, disponiendo todas aquellas medidas de carácter preventivo y correctivo que sean necesarias e impondrá las sanciones pertinentes, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar.

Artículo 100.- Falta de subsanación.- La Superintendencia dispondrá la disolución y liquidación de una cooperativa si luego de la intervención no se han subsanado las causas que la motivaron.

Artículo 101.- Segmentación.- Las cooperativas de ahorro y crédito serán ubicadas en segmentos, con el propósito de generar políticas y regulaciones de forma específica y diferenciada atendiendo a sus características particulares, de acuerdo con los siguientes criterios:

- a) Participación en el Sector;
- b) Volumen de operaciones que desarrollen;
- c) Número de socios;
- d) Número y ubicación geográfica de oficinas operativas a nivel local, cantonal, provincial, regional o nacional;
- e) Monto de activos;
- f) Patrimonio; y,
- g) Productos y servicios financieros.

Sección 2 - De las Cajas Centrales

Artículo 102.- Cajas Centrales.- Las Cajas Centrales, son instancias que se constituyen con, por lo menos, veinte cooperativas de ahorro y crédito.

El capital mínimo requerido para la constitución de una Caja Central será determinado técnicamente por el regulador. Las decisiones se tomarán mediante voto ponderado, que atenderá al número de socios que posea la cooperativa, en un rango de uno a cinco votos, garantizando el derecho de las minorías, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Reglamento.

Las Cajas Centrales, en lo relacionado con constitución, estructura interna, fusión, escisión, intervención, disolución y liquidación, se regirán por las disposiciones establecidas en el Título II de esta Ley.

Artículo 103.- Operaciones.- Las Cajas Centrales podrán efectuar con las cooperativas de ahorro y crédito, las operaciones descritas en el artículo 83 de ésta Ley y adicionalmente las siguientes:

- a) Desarrollar redes de servicios financieros entre sus afiliadas, tales como ventanillas compartidas, transferencias de fondos, remesas, pagos de servicios, entre otros;
- b) Funcionar como cámara de compensación entre sus afiliadas;
- c) Canalizar e intermediar recursos destinados al desarrollo del sector financiero popular y solidario; y,
- d) Las demás establecidas en el Reglamento de la Ley.

Sección 3 - De las Entidades Asociativas o Solidarias, Cajas y Bancos Comunales y Cajas de Ahorro

Artículo 104.- Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro.- Son organizaciones que se forman por voluntad de sus socios y con aportes económicos que, en calidad de ahorros, sirven para el otorgamiento de créditos a sus miembros, dentro de los límites señalados por la Superintendencia de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.

También se consideran como parte de estas entidades, aquellas organizaciones de similar naturaleza y actividad económica, cuya existencia haya sido reconocida por otras instituciones del Estado.

Artículo 105.- Estructura interna.- Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, tendrán su propia estructura de gobierno, administración, representación, control interno y rendición de cuentas, de acuerdo a sus necesidades y prácticas organizativas.

Artículo 106.- Transformación.- La Superintendencia, dispondrá la transformación de las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, en cooperativas de ahorro y crédito, cuando por su crecimiento en monto de activos, socios, volumen de operaciones y cobertura geográfica, superen los límites fijados por la Superintendencia para esas organizaciones.

Artículo 107.- Canalización de recursos.- Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro podrán servir como medios de canalización de recursos públicos para el desarrollo e implementación de proyectos sociales y productivos, en sus respectivos territorios.

Artículo 108.- Metodologías financieras.- Las organizaciones además del ahorro y crédito, promoverán el uso de metodologías financieras participativas como grupos solidarios, ruedas, fondos productivos, fondos mortuorios, seguros productivos o cualquier otra forma financiera destinados a dinamizar fondos y capital de trabajo.

Capítulo II - Del Fondo de Liquidez y del Seguro de Depósitos

Artículo 109.- Fondo de Liquidez y Seguro de Depósitos.- Créanse el Fondo de Liquidez y el Seguro de Depósitos del Sector Financiero Popular y Solidario, como mecanismos articulados y complementarios.

El Fondo de Liquidez tiene por objeto conceder créditos de liquidez, de liquidez contingente y para cubrir deficiencias en la cámara de compensación a las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y en las cajas de ahorro, reguladas por esta Ley.

El Seguro de Depósitos tiene por objeto proteger los depósitos efectuados en las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y en las cajas de ahorro, reguladas por esta Ley.

Artículo 110.- Organización.- Para su funcionamiento y administración, el Fondo de Liquidez y el Seguro de Depósitos contarán con un Directorio único y dos Secretarías Técnicas, ejercidas por el Banco Central del Ecuador y por la Corporación del Seguro de Depósitos -COSEDE-, las mismas que asumirán la ejecución e instrumentación de las operaciones del Fondo de Liquidez y del Seguro de Depósitos, respectivamente.

Artículo 111.- Del Directorio.- El Directorio único estará conformado por el Ministro encargado de la Coordinación del Desarrollo Social o su delegado, que lo presidirá y tendrá voto dirimente; el Ministro encargado de la Coordinación de la Política Económica o su delegado; un delegado del Comité Interinstitucional y un técnico delegado por el Directorio de la Corporación.

Asistirán, con voz informativa y sin voto, los presidentes del Banco Central del Ecuador y del Directorio de la Corporación de Seguro de Depósitos.

El Directorio tendrá las siguientes atribuciones;

- a) Dictar las políticas generales, administrativas y operacionales del Fondo de Liquidez y del Seguro de Depósitos;
- b) Reglamentar su funcionamiento interno;
- c) Determinar los requisitos y las condiciones necesarias para el acceso a los préstamos del Fondo de Liquidez y a las coberturas del Seguro de Depósitos;
- d) Fijar, anualmente, el monto y periodicidad de las primas y valores que, en forma diferenciada, deben aportar las instituciones del Sector Financiero Popular y Solidario, para cada uno de los mecanismos;
- e) Determinar las líneas, características y condiciones de los créditos de liquidez y de liquidez contingente;
- f) Determinar los depósitos asegurados y los excluidos de la cobertura del Seguro de Depósitos;
- g) Disponer la devolución de los depósitos asegurados en los casos que aplique;
- h) Cumplir con los procedimientos de resolución ordenados por la Superintendencia;
- i) Determinar, anualmente, el monto de la cobertura del Seguro de Depósitos; y,
- j) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Liquidez y del Seguro de Depósitos, determinados en la presente Ley y su reglamento.

Sección 1 - Del Fondo de Liquidez

Artículo 112.- Financiamiento.- El Fondo de Liquidez, se financiará con los aportes reembolsables y no reembolsables, periódicos, obligatorios y diferenciados de todas las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario, que serán fijados por la

Superintendencia y por los rendimientos que generen las operaciones de crédito y las inversiones del Fondo.

Artículo 113.- Funcionamiento.- El Fondo operará a través de un fideicomiso mercantil de inversión, que será controlado exclusivamente por la Superintendencia y será administrado por la Secretaria Técnica.

Artículo 114.- Inversiones del Fondo.- El Fondo será invertido en condiciones de alta liquidez, de inmediata disponibilidad, seguridad, diversificación y rentabilidad, enmarcadas en las políticas de inversión aprobadas por el Directorio.

Artículo 115.- Créditos.- El Fondo otorgará a sus participantes créditos a plazos no mayores de ciento veinte días y que no excederán del diez por ciento (10%) de los activos del fideicomiso, ni del cien por ciento (100%) del patrimonio de la beneficiaria del crédito. Los créditos serán garantizados con inversiones y cartera con calificación "A" de las entidades beneficiarias, por un monto igual a, por lo menos, el ciento cuarenta por ciento (140%) del crédito aprobado.

Sección 2 - Del Seguro de Depósitos 33

Artículo 116.- Financiamiento.- El fondo del Seguro de Depósitos del Sector Financiero Popular y Solidario se constituirá con los siguientes recursos:

- a) El aporte inicial que realice la COSEDE, con cargo al Fondo del Seguro de Depósitos que administra, y que será el monto acumulado por las cooperativas de ahorro y crédito que integran el Seguro de Depósitos, que incluirá el valor proporcional de los fondos aportados a la Ex AGD.
- b) Las primas que, obligatoriamente, deberán cancelar las instituciones integrantes del Sector Financiero Popular y Solidario, de conformidad con lo previsto en la presente Ley y su reglamento;
- c) El rendimiento de las inversiones y las utilidades líquidas de cada ejercicio anual del fondo del Seguro de Depósitos del Sector Financiero Popular y Solidario;
- d) Las donaciones que reciba el fondo del Seguro de Depósitos del Sector Financiero Popular y Solidario;
- e) Los provenientes de préstamos o líneas contingentes; y,
- f) Otras que determine la normativa complementaria.

El patrimonio del fondo del Seguro de Depósitos será inembargable y no podrá ser afectado por las obligaciones que los aportantes mantengan con terceros. Los acreedores del seguro no podrán hacer efectivos sus créditos contra los aportantes, cuya responsabilidad se limita a sus aportaciones.

La constitución y operación del fondo del Seguro de Depósitos estará exenta de toda clase de impuestos.

Artículo 117.- Funcionamiento.- El Seguro de Depósitos operará mediante la constitución de un fideicomiso mercantil, que será controlado exclusivamente por la Superintendencia y será administrado por la Secretaría Técnica.

Artículo 118.- Activación del Seguro de Depósitos.- El Seguro de Depósitos se activará ante situaciones de debilidad patrimonial que hagan presumir el deterioro futuro del patrimonio existente.

Verificadas las circunstancias antes indicadas la Superintendencia, mediante resolución, determinará los mecanismos establecidos en la presente Ley, con el objeto de aplicar uno o más de los procedimientos de resolución siguientes:

- a) Fortalecimiento patrimonial, a través de aporte de capital contra activos;
- b) Fusión con otra cooperativa del mismo tipo; y,
- c) Exclusión de activos y pasivos.

En caso que no se pudieran aplicar los procedimientos de resolución antes establecidos, la Superintendencia procederá con la declaratoria de liquidación forzosa de la institución, la cual será notificada al Directorio del Fondo de Liquidez y del Seguro de Depósitos, quien ordenará el pago del seguro a los depositantes, dentro de los límites y procedimientos establecidos. El pago del Seguro de Depósitos implica la subrogación, de pleno derecho, en la condición de acreedor que opera a ¡favor del fideicomiso mercantil constituido para el Seguro.

Artículo 119.- Inversiones.- Los recursos disponibles en el Seguro de Depósitos deberán invertirse observando los principios de seguridad, liquidez, diversificación y rentabilidad y enmarcarse en las políticas de inversión aprobadas por el Directorio.

Artículo 120.- Información.- A efectos de mantener un coordinado y eficiente funcionamiento del seguro de depósitos, la Superintendencia deberá remitir a la Secretaría Técnica del Seguro de Depósitos, de manera permanente y continuada, toda información relativa a solvencia financiera, riesgo contingente, calificaciones, programas de regularización y de vigilancia, y demás información relevante respecto de las instituciones bajo su control.

La utilización de la información transmitida se regirá bajo los estándares de seguridad, sigilo o reserva profesional de su procedencia; y, será de uso exclusivo en los fines estrictamente relacionados con la administración del seguro de depósitos.

Título IV - De los Organismos de Integración y Entidades de Apoyo

Artículo 121.- Organismos de integración.- Las organizaciones sujetas a la presente Ley, podrán constituir organismos de integración representativa o económica, con carácter local, provincial, regional o nacional.

Artículo 122.- Decisiones.- Las decisiones se tomarán mediante voto ponderado, en función del número de socios que posea cada organización, en un rango de uno a cinco votos, garantizando el derecho de las minorías, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Reglamento.

Artículo 123.- Integración representativa.- La integración representativa se constituirá con el objeto de defender los intereses de sus afiliadas, ante organismos públicos y privados, colaborar en la solución de sus conflictos y brindarles capacitación, asesoría y asistencia técnica y podrán ser uniones, redes, federaciones de cada grupo y confederaciones.

Artículo 124.- Integración económica.- La integración económica se constituirá con el objeto de complementar las operaciones y actividades de sus afiliadas mediante la gestión de negocios en conjunto; producir, adquirir, arrendar, administrar o comercializar bienes o servicios en común; estructurar cadenas y/o circuitos de producción, agregación de valor o comercialización; y, desarrollar sus mutuas capacidades tecnológicas y competitivas, a través de alianzas estratégicas, consorcios, redes o grupos, de manera

temporal o permanente, bajo la forma y condiciones libremente pactadas por sus integrantes.

El Estado propenderá a impulsar acciones que propicien el intercambio comercial justo y complementario de bienes y servicios de forma directa entre productores y consumidores.

Artículo 125.- Constitución y estructura interna.- La constitución, estructura interna, control interno, rendición de cuentas, actividades y objetivos específicos de los organismos de integración representativa y económica, se establecerán en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 126.- Aplicación de normas.- En lo no previsto en el presente Título y en el reglamento a esta Ley, se observarán las normas que rigen para el sector cooperativo, en todo cuanto les sea aplicable.

Artículo 127.- Entidades de apoyo.- Para efectos de la presente Ley, serán considerados como entidades de apoyo los Gobiernos Autónomos Descentralizados; y, las fundaciones y corporaciones civiles que tengan como objeto social principal la promoción, asesoramiento, capacitación y asistencia técnica a las personas y organizaciones amparadas por la presente Ley.

Las fundaciones y corporaciones civiles, que tengan como objeto principal el otorgamiento de créditos se sujetarán en cuanto al ejercicio de esta actividad a la regulación y control establecidos en esta Ley incluyendo la de prevención de lavado de activos.

Título V - Del Fomento, Promoción e Incentivos

Artículo 128.- Mecanismos.- Sin perjuicio de los incentivos que la legislación en general reconozca a favor de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, el Estado fomentará, promoverá y otorgará incentivos a las personas y organizaciones amparadas por esta Ley, con el objetivo de fomentar e impulsar su desarrollo y el cumplimiento de sus objetivos en el marco del sistema económico social y solidario.

Las personas y organizaciones a las que se refiere esta Ley, se beneficiarán de los incentivos y demás medidas de promoción, fomento y fortalecimiento, contempladas en el Código de la Producción para todas las personas naturales y jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva. Especial atención recibirán las personas y organizaciones de la Economía Popular y Solidaria que desarrollen su actividad productiva en los cantones fronterizos.

En ningún caso, las personas y organizaciones sujetas a esta Ley, gozarán de un régimen de fomento o privilegio menor del que gocen otras organizaciones, sociedades o asociaciones con fines u objetivos similares desde el punto de vista social o económico.

Para acceder a estos beneficios, las personas y organizaciones, deberán constar en el Registro Público, al que se refiere el artículo 6 de esta Ley.

No podrán acceder a los beneficios que otorga esta Ley, las personas y organizaciones que se encuentren en conflicto de interés con las instituciones del Estado responsables del otorgamiento de tales beneficios y sus funcionarios.

Las personas y organizaciones amparadas por la presente Ley mantendrán todos los beneficios específicos existentes en la normativa vigente.

Artículo 129.- Medidas de acción afirmativa.- El Estado a través de los entes correspondientes formulará medidas de acción afirmativa a favor de las personas y organizaciones a las que se refieren el ámbito de esta Ley, tendientes a reducir las desigualdades económicas, sociales, étnicas, generacionales y de género.

Artículo 130.- Coordinación.- Las instituciones del Estado y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para la promoción, fomento e incentivos a las organizaciones sujetas a esta Ley deberán coordinar entre si el otorgamiento de estos beneficios a favor de las personas y organizaciones con el propósito de evitar duplicidad.

Las instituciones del Estado, que desarrollen medidas de fomento, promoción e incentivos a favor de las personas y organizaciones amparadas por esta Ley presentarán al Comité Interinstitucional informes sobre tales medidas, recursos asignados o invertidos y resultados obtenidos.

Artículo 131.- Revocatoria o suspensión.- La Superintendencia podrá revocar, suspender o restringir las medidas de fomento, incentivos y demás beneficios que esta Ley otorga a las personas y organizaciones de la Economía Popular y Solidario y del Sector Financiero Popular y Solidario, al comprobarse que aquellas están haciendo uso indebido de ellas.

Capítulo I - Del Fomento

Artículo 132.- Medidas de fomento.- El Estado establecerá las siguientes medidas de fomento a favor de las personas y organizaciones amparadas por esta Ley:

1. Contratación Pública.- El ente rector del sistema nacional de contratación pública de forma obligatoria implementará en los procedimientos de contratación pública establecidos en la Ley de la materia, márgenes de preferencia a favor de las personas y organizaciones regidas por esta Ley, en el siguiente orden: Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria; y Unidades Económicas Populares.

La Feria Inclusiva será uno de los procedimientos de contratación que las entidades contratantes utilizarán para priorizar la adquisición de obras, bienes o servicios normalizados o no normalizados provenientes de las personas y organizaciones sujetas a esta Ley.

El ente rector de las compras públicas en coordinación con el Instituto establecerá las obras, bienes y servicios normalizados y no normalizados que deberán ser adquiridos a través de Feria Inclusiva y otros procedimientos.

2. Formas de Integración Económica.- Todas las formas de Integración Económica, se beneficiarán de servicios financieros especializados; y, servicios de apoyo en: profesionalización de los asociados, asesoría de procesos económicos y organizativos, acreditaciones y registros, y acceso a medios de producción.

3. Mandamiento.- La Corporación y la banca pública diseñarán e implementarán productos y servicios financieros especializados y diferenciados, con líneas de crédito a largo plazo destinadas a actividades productivas de las organizaciones amparadas por esta ley.

Las instituciones del sector público podrán cofinanciar planes, programas y proyectos de inversión para impulsar y desarrollar actividades productivas, sobre la base de la corresponsabilidad de los beneficiarios y la suscripción de convenios de cooperación. Los recursos serán canalizados a través de las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario.

4. Educación y Capacitación.- En todos los niveles del sistema educativo del país, se establecerán programas de formación, asignaturas, carreras y programas de capacitación en temas relacionados con los objetivos de la presente Ley, particularmente en áreas de la producción y/o comercialización de bienes o servicios.

5. Propiedad Intelectual.- La entidad pública responsable de la propiedad intelectual, apoyará y brindará asesoría técnica, para la obtención de marcas colectivas, y otros

instrumentos de orden legal que incentiven la protección de los conocimientos colectivos, saberes ancestrales, obtenciones vegetales y otras creaciones intelectuales.

6. Medios de pago complementarios. Las organizaciones que conforman la Economía Popular y Solidaria podrán utilizar medios de pago complementarios, sea a través de medios físicos o electrónicos, para facilitar el intercambio y la prestación de bienes y servicios, dentro de las prescripciones establecidas en la Ley, su Reglamento y las regulaciones que para el efecto emita el órgano regulador competente.

7. Difusión.- El Instituto gestionará espacios en los medios de comunicación públicos y privados a nivel local y nacional que permitan incentivar el consumo de bienes y servicios ofertados por las personas y organizaciones de la economía popular y solidaria.

8. Seguridad Social.- Se garantiza el acceso de las personas naturales, amparadas por esta Ley, al derecho a la seguridad social a través de distintos regímenes que serán establecidos en la ley de la materia considerando la naturaleza de su actividad.

9. Equidad.- Se establecerán las medidas apropiadas para promover la equidad y transparencia en los intercambios comerciales entre el sector de la economía popular y solidaria y los demás sectores, principalmente de los productos vinculados a la seguridad alimentaria, evitando la persistencia de prácticas de abuso del poder económico.

10. Delegación a la economía popular y solidaria.- El Estado podrá delegar de manera excepcional a la economía popular y solidaria la gestión de los sectores estratégicos y servicios públicos.

Artículo 133.- Gobiernos Autónomos Descentralizados.- Los gobiernos autónomos descentralizados, en ejercicio concurrente de la competencia de fomento de la economía popular y solidaria establecida en la respectiva Ley, incluirán en su planificación y presupuestos anuales la ejecución de programas y proyectos socioeconómicos como apoyo para el fomento y fortalecimiento de las personas y organizaciones amparadas por esta Ley, e impulsarán acciones para la protección y desarrollo del comerciante minorista a través de la creación, ampliación, mejoramiento y administración de centros de acopio de productos, centros de distribución, comercialización, pasajes comerciales, recintos feriales y mercados u otros.

Los Gobiernos Autónomos en el ámbito de sus competencias, determinarán los espacios públicos para el desarrollo de las actividades económicas de las personas y las organizaciones amparadas por esta Ley.

Artículo 134.- Las Municipalidades conformando regímenes de administración en condominio, con comerciantes minoristas, podrán construir mercados, centros de acopio, silos y otros equipamientos de apoyo a la producción y comercialización de productos y servicios. El régimen de administración en condominio entre las Municipalidades y de los comerciantes minoristas se regulan mediante Ordenanza.

Artículo 135.- Las Municipalidades podrán mediante Ordenanza regular la organización y participación de los pequeños comerciantes en actividades productivas, comerciales o de servicios que permitan la incorporación y participación de estos sectores en la dinamización de la economía local, para lo cual, propiciarán la creación de organizaciones comunitarias para la prestación de servicios o para la producción de bienes, la ejecución de pequeñas obras públicas, el mantenimiento de áreas verdes urbanas, entre otras actividades.

Artículo 136.- Para la prestación de los servicios públicos de competencia municipal, las empresas públicas municipales podrán propiciar la conformación de organizaciones comunitarias para la gestión delegada de dichos servicios. La delegación de estos

servicios públicos se regulará mediante Ordenanzas. En las áreas rurales sus directorios tendrán entre sus miembros a un delegado técnico de las Juntas Parroquiales de cada jurisdicción o de la mancomunidad de las Juntas Parroquiales en las que preste el servicio.

Capítulo II - De la Promoción

Artículo 137.- Medidas de promoción.- El Estado establecerá las siguientes medidas de promoción a favor de las personas y organizaciones amparadas por esta Ley:

- a) Promoverá la asociación a través de planes y programas públicos;
- b) Propenderá a la remoción de los obstáculos administrativos que impidan el ejercicio de sus actividades;
- c) Facilitará el acceso a la innovación tecnológica y organizativa;
- d) Fomentará el comercio e intercambio justo y el consumo responsable;
- e) Implementará planes y programas, destinados a promover, capacitar, brindar asistencia técnica y asesoría en producción exportable y en todo lo relacionado en comercio exterior e inversiones;
- f) Impulsará la conformación y fortalecimiento de las formas de integración económica tales como cadenas y circuitos;
- g) Implementará planes y programas que promuevan el consumo de bienes y servicios de calidad, provenientes de las personas y organizaciones amparadas por esta Ley;
- h) Incorporará progresivamente al Sector Financiero Popular y Solidario al Sistema Nacional de Pagos administrado por el Banco Central del Ecuador; y,
- i) Las demás previstas en la ley.

Capítulo III - De los Incentivos

Artículo 138.- Políticas.- El Estado diseñará políticas de fomento tendientes a promover la producción de bienes y servicios y conductas sociales y económicas responsables de las personas y organizaciones amparadas por esta Ley y podrá otorgar tratamientos diferenciados, en calidad de incentivos, a favor de las actividades productivas, los que serán otorgados en función de sectores, ubicación geográfica u otros parámetros, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento.

Artículo 139.- Hecho Generador de Tributos.- Los actos solidarios que efectúen con sus miembros las organizaciones a las que se refiere esta Ley, como parte del ejercicio de las actividades propias de su objeto social, no constituyen hechos generadores de tributos; en cambio, los actos y demás operaciones que efectúen con terceros, están sujetos al régimen tributario común.

Las utilidades que pudieran provenir de operaciones con terceros y que no sean reinvertidos en la organización, gravarán Impuesto a la Renta, tanto para el caso de la organización, cuanto para los integrantes cuando éstos los perciban.

Artículo 140.- Homologación de créditos.- Los préstamos que otorguen las cooperativas de ahorro y crédito en beneficio de sus socios, que tengan como finalidad la adquisición, reparación o conservación de vivienda, tendrán el mismo tratamiento tributario contemplado para los préstamos que otorga el Banco Ecuatoriano de la Vivienda y Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda.

Artículo 141.- Incentivos por responsabilidad ambiental.- El Estado incentivará a las personas y organizaciones sujetas a esta Ley, para que sus actividades se realicen

conforme a los postulados del desarrollo sustentable establecidos en la Constitución y contribuyan a la conservación y manejo del patrimonio natural.

Título VI - De las Relaciones con el Estado

Capítulo I - De la Rectoría

Artículo 142.- Comité Interinstitucional de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.- Créase el Comité Interinstitucional como ente rector de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.

El Comité Interinstitucional se integrará por los ministros de Estado que se relacionen con la Economía Popular y Solidaria, según lo determine el Presidente de la República y se organizará conforme al Reglamento a la presente Ley.

El Comité Interinstitucional será responsable de dictar y coordinar las políticas de fomento, promoción e incentivos, funcionamiento y control de las actividades económicas de las personas y organizaciones regidas por la presente Ley, con el propósito de mejorarlas y fortalecerlas. Así mismo, el Comité Interinstitucional evaluará los resultados de la aplicación de las políticas de fomento, promoción e incentivos.

Artículo 143.- Consejo Consultivo.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en el ámbito de sus competencias, las personas y organizaciones amparadas por esta Ley, podrán participar en la gestión del Comité Interinstitucional, a través de mecanismos de información y de consulta no vinculante.

La participación, mecanismos de elección y requisitos de los representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, las personas y organizaciones, serán determinados en el Reglamento de la presente Ley.

Capítulo II - De la Regulación

Artículo 144.- Regulación.- La regulación de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario es potestad de la Función Ejecutiva, que la ejercerá de la siguiente manera:

La regulación de la Economía Popular y Solidaria a través del Ministerio de Estado que determine el Presidente de la República en el Reglamento de la presente Ley.

La regulación del Sector Financiero Popular y Solidario estará a cargo de la Junta de Regulación, instancia de la Función Ejecutiva conformada por tres miembros con voz y voto, que serán los titulares de coordinación de desarrollo social, de la política económica y un delegado del Presidente de la República.

La Junta de Regulación, estará presidida por el titular de coordinación de desarrollo social, y contará con una Secretaría Técnica a cargo de la presidencia de la Junta. El Superintendente de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario o su delegado participará en las sesiones de la Junta de Regulación en calidad de invitado con voz informativa pero sin voto.

Las regulaciones se expedirán sobre la base de las políticas dictadas por el Comité Interinstitucional.

Las instituciones reguladoras tendrán la facultad de expedir normas de carácter general en las materias propias de esta competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales.

Artículo 145.- Regulación diferenciada.- Las regulaciones serán expedidas en forma diferenciada tanto para las personas y organizaciones que conforman la Economía

Popular y Solidaria, como el Sector Financiero Popular y Solidario y se referirán a la protección, promoción e incentivos, funcionamiento y control de las actividades económicas de las personas y organizaciones a las que se refiere esta Ley, en coherencia con las regulaciones que emitan otras instituciones del Estado en orden a proteger los derechos de los usuarios y consumidores.

La regulación respecto de las cooperativas de ahorro y crédito que forman parte del Sector Financiero Popular y Solidario, se establecerá además acorde a los segmentos en que se ubiquen dichas organizaciones.

Capítulo III - Del Control

Artículo 146.- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.- El control de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario estará a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que se crea como organismo técnico, con jurisdicción nacional, personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera y con jurisdicción coactiva.

La Superintendencia tendrá la facultad de expedir normas de carácter general en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales.

Artículo 147.- Atribuciones.- La Superintendencia tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Ejercer el control de las actividades económicas de las personas y organizaciones sujetas a esta Ley;
- b) Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las instituciones sujetas a su control;
- c) Otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sujetas a esta Ley y disponer su registro;
- d) Fijar tarifarios de servicios que otorgan las entidades del sector financiero popular y solidario;
- e) Autorizar las actividades financieras de las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario;
- f) Levantar estadísticas de las actividades que realizan las organizaciones sujetas a esta Ley;
- g) Imponer sanciones; y,
- h) Las demás previstas en la Ley y su Reglamento.

Artículo 148.- Organización interna.- La Superintendencia se organizará administrativamente distinguiendo la naturaleza del Sector de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, bajo una gestión desconcentrada. La Superintendencia tendrá por lo menos una intendencia para el control específico del Sector Financiero Popular y Solidario.

Ni el Superintendente ni los funcionarios de nivel directivo podrán desempeñar funciones en las instituciones u organizaciones del sector financiero popular y solidario a las que se refiere la presente ley hasta después de un año de haber terminado sus funciones.

Los funcionarios y empleados de la Superintendencia se someterán a las disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público.

Ningún funcionario o empleado de la Superintendencia, mientras esté en el ejercicio de sus funciones, podrá ser director, funcionario o empleado de ninguna de las instituciones u organizaciones sujetas al control de la Superintendencia.

Si algún funcionario o empleado de la Superintendencia tuviese cónyuge o pariente dentro del primer grado civil de consanguinidad o primero de afinidad, o padre o hijo adoptivo,

empleado en alguna de las instituciones controladas, está obligado a dar a conocer el hecho por escrito al Superintendente, bajo pena de remoción.

No podrán ser funcionarios o empleados de la Superintendencia más de tres personas que mantengan entre sí, alguno de los vínculos mencionados en el inciso anterior y, en ningún caso, en la misma oficina dos personas que mantengan dichos vínculos.

Artículo 149.- Patrimonio.- El patrimonio de la Superintendencia se integra por:

- a) Las asignaciones que constarán en el Presupuesto General del Estado;
- b) Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título;
- c) Los legados o donaciones que perciba de personas naturales o jurídicas y,
- d) Otros ingresos de autogestión.

Artículo 150.- Superintendente.- El Superintendente será designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de la terna enviada por el 46

Presidente de la República. Durará cinco años en sus funciones, deberá acreditar título universitario de tercer nivel en carreras afines con la función que desempeñará y haber ejercido con probidad notoria en profesiones relacionadas con la función que desempeñará o experiencia en actividades de administración, control, o asesoría en las organizaciones, instituciones y asociaciones que integran la economía popular y solidaria y el sector financiero popular y solidario.

El Superintendente presentará anualmente a la Asamblea Nacional, una memoria que contenga el detalle de las principales labores realizadas por la institución y un resumen de los datos de la situación económica de las instituciones controladas, relacionados con el ejercicio del año anterior, de acuerdo con el reglamento.

Artículo 151.- Atribuciones del Superintendente.- Son atribuciones del Superintendente las siguientes:

- a) Representar judicial y extrajudicialmente a la Superintendencia;
- b) Dictar las normas de control;
- c) Imponer sanciones;
- d) Celebrar a nombre de la Superintendencia los contratos y convenios que requiera la gestión institucional;
- e) Dirigir, coordinar y supervisar la gestión administrativa de la Superintendencia;
- f) Nombrar el personal necesario para el desempeño de las funciones de la Superintendencia;
- g) Delegar algunas de sus facultades, siempre en forma concreta y precisa, a los funcionarios que juzgue del caso;
- h) Resolver recursos de orden administrativo; y,
- i) Las demás establecidas en la Ley y en su Reglamento.

Artículo 152.- Supervisión auxiliar.- Los organismos de integración y otras entidades especializadas podrán colaborar con la Superintendencia en la realización de una o varias actividades específicas de supervisión, cumpliendo las condiciones y disposiciones que dicte la Superintendencia para el efecto.

Capítulo IV - Del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 47

Artículo 153.- Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria.- El Instituto es una entidad de derecho público, adscrita al ministerio de Estado a cargo de la inclusión económica y social, con jurisdicción nacional, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, administrativa y financiera que ejecuta la política pública,

coordina, organiza y aplica de manera desconcentrada, los planes, programas y proyectos relacionados con los objetivos de esta Ley.

Artículo 154.- Misión.- El Instituto tendrá como misión el fomento y promoción de las personas y organizaciones sujetas a esta Ley, en el contexto del sistema económico social y solidario previsto en la Constitución de la República y consistente con el Plan Nacional de Desarrollo, con sujeción a las políticas dictadas por el Comité Interinstitucional, para lo cual ejercerá las funciones que constarán en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 155.- Patrimonio.- El patrimonio del Instituto se integra por:

- a) Las asignaciones que constarán en el Presupuesto General del Estado;
- b) Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título; y,
- c) Cualquier renta, legado o donación que perciba de personas naturales o jurídicas.

Artículo 156.- Director.- El Instituto estará representado legalmente por su Director General, quien será de libre nombramiento y remoción por el ministro de Estado responsable de la inclusión económica y social, de entre los profesionales universitarios de tercer nivel y con experiencia en el ámbito de la economía popular y solidaria.

Artículo 157.- Atribuciones del Director General.- Son atribuciones del Director General:

- a) Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial del Instituto;
- b) Ejecutar las políticas dispuestas por el Comité Interinstitucional;
- c) Dirigir, coordinar y supervisar la gestión administrativa del Instituto;
- d) Presentar a consideración y aprobación del ministerio al cual se encuentra adscrito el Instituto, los planes de acción y el presupuesto institucional;
- e) Celebrar a nombre del Instituto los contratos y convenios que requiera la gestión institucional; y,
- f) Las demás que le asigne la Ley y el Reglamento.

Capítulo V - De la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

Artículo 158.- Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.- Créase la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, como un organismo de derecho público, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, con jurisdicción nacional.

La Corporación en lo relativo a su creación, actividades, funcionamiento y organización se regirá por esta Ley y su correspondiente Estatuto social que deberá ser aprobado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Artículo 159.- Misión.- La Corporación tendrá como misión fundamental brindar servicios financieros con sujeción a la política dictada por el Comité Interinstitucional a las organizaciones amparadas por esta Ley, bajo mecanismos de servicios financieros y crediticios de segundo piso; para lo cual ejercerá las funciones que constarán en su Estatuto social.

La Corporación aplicará las normas de solvencia y prudencia financiera que dicte la Superintendencia, con el propósito de preservar de manera permanente su solvencia patrimonial.

Artículo 160.- Patrimonio.- El patrimonio de la Corporación se integra por:

- a) Las asignaciones que constarán en el Presupuesto General del Estado;

- b) Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiriera a cualquier título;
- c) Cualquier renta, legado o donación que reciba de personas naturales o jurídicas;
- d) Por operaciones financieras y crediticias; y,
- e) Capitalización de los rendimientos de la gestión financiera y crediticia.

Artículo 161.- Organismos de la Corporación.- Son organismos de la Corporación los siguientes:

- a) Directorio; y,
- b) Dirección General a cargo del Director General.

Artículo 162.- Directorio.- El Directorio es el organismo directivo de la Corporación que tendrá a su cargo la determinación de los lineamientos generales para la implementación y ejecución de las actividades de la Corporación, la definición y la aprobación de los instructivos operacionales necesarios y tendrá la responsabilidad de supervisar y evaluar la administración, uso y destino de los recursos.

El Directorio estará integrado por los siguientes miembros:

- a) Un representante por cada uno de los ministerios de Estado responsables de la coordinación de la política económica, de la producción y de desarrollo social;
- b) Un representante del ministerio de Estado responsable de las finanzas; y,
- c) Un representante del ministerio de Estado responsable de la inclusión económica y social.

Actuará como Presidente del Directorio, el representante del ministerio de Estado a cargo de la coordinación de desarrollo social y como secretario, el Director General de la Corporación, este último con voz y sin derecho a voto.

Artículo 163.- Funciones del Directorio.- Son funciones del Directorio las siguientes:

- a) Aprobar el Estatuto social y las metodologías de operación de la Corporación y sus componentes de crédito, inversiones y demás servicios financieros, bajo criterios de seguridad, liquidez y sostenibilidad;
- b) Aprobar la creación de nuevos mecanismos de financiamiento, servicios financieros, garantía crediticia, fortalecimiento y capacitación o rediseño de los existentes;
- c) Vigilar que se cumplan con las políticas y normas de la Corporación;
- d) Conocer y aprobar los planes y presupuestos de la Corporación;
- e) Designar y remover al Director General de la Corporación; y,
- f) Seleccionar el auditor externo.

Artículo 164.- Atribuciones del Director General.- Son atribuciones del Director General:

- a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial; 50
- b) Ejecutar las políticas dispuestas por el Comité Interinstitucional;
- c) Celebrar a nombre de la Corporación los contratos y convenios que requiera la gestión institucional;
- d) Dirigir, coordinar y supervisar la gestión administrativa de la Corporación; y,
- e) Las demás que le otorgue la Ley y su Estatuto social.

Artículo 165.- Control y Auditoria.- La Corporación estará sometida al control y supervisión de la Superintendencia y tendrá una unidad de auditoría interna encargada de las funciones de su control interno.

Artículo 166.- Jurisdicción Coactiva.- La Corporación ejercerá la jurisdicción coactiva, para el cobro de los créditos y obligaciones a su favor, por parte de personas naturales o

jurídicas. La coactiva la ejercerá con sujeción a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

La jurisdicción coactiva se ejercerá con fundamento en cualquier título del que conste una deuda en favor o a la orden de la Corporación..

Título VII - De las Obligaciones, Infracciones y Sanciones

Artículo 167.- Obligaciones.- Son obligaciones de las organizaciones referidas en esta Ley, las siguientes:

- a) Ejercer las actividades detalladas en el objeto social del Estatuto de la organización;
- b) Mantener el fondo o capital social mínimo autorizado;
- c) Convocar a Asamblea General en el tiempo y forma que establezca el Estatuto social de la organización;
- d) Respetar el ejercicio de los cargos directivos únicamente por el tiempo establecido en el Estatuto social;
- e) Dar todas las facilidades para que los órganos de control y regulación cumplan sus funciones;
- f) Llevar un registro de todos los integrantes de la organización, archivos y registros de las actas;
- g) Llevar la contabilidad actualizada de conformidad con el Catalogo Único de Cuentas;
- h) Cumplir con el procedimiento relacionado con la disolución y liquidación de la organización y en el caso de las cooperativas el correcto destino del Fondo Irrepartible de Reserva Legal; y,
- i) Cumplir las regulaciones de funcionamiento y control de las actividades económicas.

Artículo 168.- Prohibiciones.- Son prohibiciones para las personas y organizaciones sujetas a ésta Ley:

- a) Conceder preferencias o privilegios a los integrantes de la organización en particular, ni aún a título de fundadores, directivos, funcionarios y empleados; Exigir a los nuevos integrantes de la organización que suscriban un mayor número de aportes, cuotas o aportaciones de los que hayan adquirido los fundadores desde que ingresaron a la organización, o que contraigan con la entidad cualquier obligación económica extraordinaria, que no la hayan contraído dichos integrantes;
- b) Financiar los aportes, cuotas o aportaciones de sus integrantes, para con la organización;
- c) Los directivos de las organizaciones quedan prohibidos de utilizar su condición y los recursos de la entidad para establecer relaciones contractuales, profesionales, laborales o de servicios personales directa o indirectamente con otras personas u organizaciones;
- d) Establecer acuerdos, convenios o contratos con personas naturales o jurídicas, ajenas a la organización, que les permita participar directa o indirectamente de los beneficios derivados de las medidas de fomento, promoción e incentivos que conceden esta Ley;
- e) Lucrarse o favorecerse fraudulentamente de los beneficios que otorga esta Ley;
- f) Favorecerse con recursos y beneficios adicionales a los previstos en la ley;
- g) Ocultar, alterar fraudulentamente o suprimir en cualquier informe de operación, datos o hechos respecto de los cuales la Superintendencia y el público tengan derecho a estar informados; y,
- h) Las demás establecidas en la Ley y su reglamento.

Artículo 169.- Infracciones en la Economía Popular y Solidaria.-

- a) No entregar la información sobre la situación económica y de gestión de la organización;

- b) La trasgresión generalizada de los derechos de los integrantes de la organización; y,
- c) Las demás previstas en la Ley.

Artículo 170.- Infracciones en el Sector Financiero Popular y Solidario.-

- a) Ejercer actividades no autorizadas por la Superintendencia;
- b) No entregar la información sobre la situación económica y de gestión de la organización;
- c) Incumplir las normas de solvencia y prudencia financiera señaladas en el artículo 85 de la presente Ley;
- d) Reestructurar créditos otorgados a los gerentes, vocales de los consejos, representantes, empleados o trabajadores de la cooperativa y su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida;
- e) Incumplir con los aportes al Fondo de Liquidez y Seguro de Depósitos del Sector Financiero Popular y Solidario;
- f) Ocultar, alterar fraudulentamente o suprimir en cualquier informe de operación, datos o hechos respecto de los cuales la Superintendencia y el público tengan derecho a estar informados y,
- g) Obstaculizar la supervisión, la intervención y el control de la Superintendencia o a sus representantes debidamente autorizados u ocultar la verdadera situación de la organización;

Artículo 171.- Sanciones.- Las personas y organizaciones amparadas por esta Ley, serán sancionadas de acuerdo con lo siguiente:

- a) Multas pecuniarias, de una a cien salarios básicos unificadas que se aplicarán en forma diferenciada de acuerdo con la clase, capacidad económica y naturaleza jurídica de las personas y organizaciones;
- b) Suspensión temporal del Registro hasta un máximo de un año; y,
- c) Suspensión definitiva del Registro.

Se aplicarán estas sanciones sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales contempladas en la normativa jurídica vigente.

Artículo 172.- Aplicación de sanciones.- Las sanciones previstas en esta Ley, serán aplicadas de la siguiente manera:

- a) El incumplimiento de las obligaciones generales previstas en el artículo 167 de esta Ley, serán sancionadas con la imposición de multas. En caso de reincidencia se aplicará el doble de multa;
- b) La trasgresión de las prohibiciones, referidas en el artículo 168 literales a, b, c y d, serán sancionadas con la imposición de multas. En caso de reincidencia se aplicará el doble de multa;

En el caso de los literales e, f, g y h, del mismo artículo, se sancionarán con la suspensión temporal del Registro hasta máximo un año. En caso de reincidencia se aplicará la suspensión definitiva del Registro; y,

- c) Las infracciones señaladas en el artículo 169 y 170, serán sancionadas con la imposición de multas. En caso de reincidencia se aplicará el doble de multa.

La Superintendencia y demás organismos públicos señalados en esta Ley en caso de encontrar indicios sobre el cometimiento de infracciones penales, deberán poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado.

Artículo 173.- Procedimiento.- La potestad sancionadora de la Superintendencia establecida en esta Ley, se cumplirá observando las garantías al debido proceso determinadas en la Constitución de la República.

Para la aplicación de las sanciones señaladas en éste Título, deberá instaurarse previamente el respectivo procedimiento administrativo, cuyo trámite será establecido en el Reglamento de esta Ley.

Artículo 174.- Recursos Administrativos.- Las personas y organizaciones que se consideren afectados por actos administrativos emitidos por la Superintendencia, tendrán el derecho de presentar los recursos administrativos de conformidad con la Ley. El recurso presentado no suspende la ejecución del acto impugnado.

De la resolución que tome la Superintendencia se podrá presentar demanda ante la Jurisdicción Contenciosa y Administrativa.

Artículo 175.- Términos para deducir la impugnación y para resolver.- Para deducir los recursos previstos en esta Ley, los recurrentes tendrán el término de cinco días contados desde la notificación del acto administrativo; la Superintendencia en el término de cinco días calificará el recurso como procedente o mandará a ampliarlo, debiendo expedir, de manera motivada, su resolución en un término no mayor a treinta días contados a partir de la providencia de calificación del recurso presentado, dentro de este término se evacuarán informes, audiencias, intervención de terceros, alegaciones y cualquier otra diligencia que garantice el cumplimiento de las normas del debido proceso, y los derechos de las partes.

La falta de resolución dentro del término de treinta días, causará la pérdida de la competencia para resolver.

Artículo 176.- Cumplimiento de obligación.- La imposición de sanciones, en ningún caso releva al infractor del cumplimiento de las obligaciones infringidas.

Artículo 177.- Prescripción.- Todas las infracciones previstas en esta Ley, prescribirán en tres años, contados desde la fecha en que se hubiese cometido el hecho u ocurrida la omisión.

La prescripción se interrumpe desde el momento en que la Superintendencia inicia el procedimiento administrativo.

Artículo 178.- Responsabilidad.- Los directores, gerentes, administradores, interventores, liquidadores, auditores, funcionarios, empleados de las organizaciones, que contravengan las disposiciones de las leyes, reglamentos o regulaciones o que, intencionalmente, por sus actos u omisiones, causen perjuicios a la entidad o a terceros, incurrirán en responsabilidad administrativa, civil o penal por los daños y perjuicios que hubiesen ocasionado-

Artículo 179.- Infracciones al estatuto.- Las infracciones cometidas al estatuto social de la organización, serán sancionadas en base a las disposiciones constantes en el mismo estatuto, respetando las garantías básicas del debido proceso y seguridad jurídica. De la exclusión se podrá apelar ante la Superintendencia, cuya decisión será definitiva.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las organizaciones sujetas a esta Ley, fijarán sus propios mecanismos de control interno, incluyendo la solución de conflictos internos de acuerdo con lo que se establezca en el estatuto social; pudiendo recurrir al uso de métodos alternativos de solución de controversias.

SEGUNDA.- Las organizaciones sujetas a esta Ley incorporarán en sus informes de gestión, el balance social que acreditará el nivel de cumplimiento de los principios y sus objetivos sociales, en cuanto a la preservación de su identidad, su incidencia en el desarrollo social y comunitario, impacto ambiental, educativo y cultural.

TERCERA.- Los miembros, asociados y socios de las organizaciones sujetas a esta Ley podrán cancelar sus obligaciones económicas mediante descuento de sus remuneraciones, previa autorización escrita, hasta por un máximo del veinte y cinco por ciento de dicha remuneración.

CUARTA.- Se prohíbe toda forma de confiscación de productos, materiales o herramientas de trabajo, lícitamente adquiridos, a las personas u organizaciones amparadas por la presente Ley, según lo establecido en la Constitución de la República.

QUINTA.- El Ministerio de Finanzas, con cargo al Presupuesto General del Estado, deberá entregar al Banco Central del Ecuador y a la COSEDE los fondos necesarios para atender la operación del Fondo de Liquidez y Seguro de Depósitos del Sector Financiero Popular y Solidario.

SEXTA.- Se concede la jurisdicción coactiva a las instituciones responsables de la administración de los fideicomisos mercantiles, respecto de los derechos de cobro por las obligaciones derivadas en el Fondo de Liquidez y el Seguro de Depósitos, establecidos en la presente Ley.

SÉPTIMA.- En las organizaciones reguladas por la presente ley, cuando el número de miembros en función de género lo permita, se procurará la paridad en la integración de los órganos directivos y de control.

OCTAVA.- El Estado a través de las instituciones correspondientes levantará estadísticas y llevará cuentas satélites como parte del Sistema de Cuentas Nacionales, que permitan medir la actividad económica de las personas y organizaciones que conforman la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, y de las Actividades de autoconsumo familiar y cuidado humano, que den cuenta de las actividades de la producción, intercambio, consumo, autoconsumo y distribución, así como de la población y otras variables que servirán de insumo para la formulación de políticas públicas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, que actualmente se encuentran en funcionamiento y operación, adecuarán sus estatutos sociales a la presente Ley, de conformidad con las regulaciones que se dicten para el efecto.

Si las organizaciones no adecuren sus estatutos dentro de los plazos y regulaciones que se establezcan para el efecto, no podrán ejercer sus actividades y no accederán al fomento, promoción e incentivos que establece esta Ley. El plazo para estas adecuaciones no excederá de un año, contado a partir del nombramiento del Superintendente.

Una vez aprobado el nuevo Estatuto social de conformidad con la presente Ley, las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, procederán a elegir a las nuevas directivas, hasta tanto seguirá actuando, la última directiva elegida vigente.

SEGUNDA.- Las instituciones del Estado, que a la fecha de expedición de la presente Ley, tuvieren a su cargo, bajo cualquier modalidad, a organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, previo inventario y dentro del plazo de noventa días del requerimiento efectuado por el Superintendente, trasladarán a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el archivo y los expedientes correspondientes a dichas organizaciones.

TERCERA.- No se podrán constituir nuevas organizaciones del sector Financiero Popular y Solidario, ni abrir sucursales, agencias, u oficinas, desde la aprobación de la presente Ley hasta noventa días de designado el Superintendente de Economía Popular y Solidaria.

CUARTA.- Las peticiones presentadas por las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, ante cualquier institución del Estado, se procesarán y concluirán ante la misma entidad en base a la Ley con la que se presentaron dichas peticiones.

Así mismo, los procedimientos administrativos iniciados o que estuvieren en trámite, en cualquier institución del Estado referente a las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, se tramitarán y concluirán en la misma entidad en base a la Ley con la que se iniciaron dichos procedimientos.

QUINTA.- Mientras se instrumenta la operación del Seguro de Depósitos para el Sector Financiero Popular y Solidario y con el propósito de mantener en forma ininterrumpida la cobertura actual, la COSEDE mantendrá el servicio y cobertura en lo correspondiente a las Cooperativas de Ahorro y Crédito que lo integran y que han venido aportando, como consecuencia de la vigencia de la presente Ley, deberán incorporarse progresivamente al Seguro de Depósitos del Sector Financiero Popular y Solidario.

SEXTA.- Las instituciones del Estado que de cualquier forma mantuvieren bases de datos referentes a las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, dentro del plazo de noventa días de expedido el Reglamento de la presente Ley, trasladarán dichas bases de datos al ministerio de Estado a cuyo cargo se encuentra el Registro Público de personas y organizaciones.

El ministerio de Estado responsable de dicho Registro Público deberá ponerlo en funcionamiento y habilitarlo para uso, por parte de las personas y organizaciones, dentro del plazo de ciento ochenta días contado a partir de la expedición del Reglamento de la presente Ley.

SÉPTIMA.- Los trabajadores y servidores públicos que a la fecha de expedición de esta Ley, que en cualquier forma o a cualquier título trabajen o presten servicios en la Superintendencia de Bancos y Seguros en el control de las cooperativas de ahorro y crédito podrán pasar, previa evaluación, calificación y selección, de acuerdo a los requerimientos institucionales y la ley, a formar parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Los trabajadores y servidores públicos que prestan sus servicios en el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria - IEPS; en las dependencias determinadas en el literal d) de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Ejecutivo No. 1668 publicado en el Registro Oficial No. 577 de 24 de abril de 2009; en la Dirección Nacional de Cooperativas; en el Consejo Cooperativo Nacional y en el Programa de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria, podrán pasar a formar parte de las instituciones

que se crean en la presente Ley, previa evaluación, calificación y selección, de acuerdo a los requerimientos institucionales y la ley.

Los trabajadores y servidores públicos que pasen a laborar en las instituciones que se crean en la presente ley, conservarán por lo menos las condiciones en que se desempeñan actualmente, sin menoscabo a sus derechos.

En el caso de los servidores públicos, de existir cargos innecesarios se aplicará el proceso de supresión de puestos de acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público

OCTAVA.- Los activos y pasivos de la Dirección Nacional de Cooperativas y del Consejo Cooperativo Nacional, previo inventario, pasan a formar parte del patrimonio institucional de la Superintendencia.

Los activos y pasivos del Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria, previo inventario, pasan a formar parte del patrimonio institucional de la Corporación.

Los activos y pasivos no transferidos serán tratados de conformidad con el Reglamento General de Bienes del Sector Público.

NOVENA.- Las instituciones públicas que se extinguen por disposición de esta Ley, deberán ser liquidadas de acuerdo con lo que se establezca la ley para estos casos.

DÉCIMA.- Todos los derechos y obligaciones constantes en convenios, suscritos por la Dirección Nacional de Cooperativas, Consejo Cooperativo Nacional e Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria - IEPS, serán asumidos, previa la suscripción de las adendas respectivas, por el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria que se crea en esta ley.

Todos los derechos y obligaciones constantes en convenios, suscritos por el Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria serán asumidos, previa la suscripción de las adendas respectivas, por la Corporación.

UNDÉCIMA.- A partir de la vigencia de esta Ley la Dirección Nacional de Cooperativas, el Consejo Cooperativo Nacional y el Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria, no podrán contraer nuevas obligaciones, excepto aquellas que sean estrictamente necesarias para la implementación del proceso de transición y las indispensables para sostener la ejecución de aquellos proyectos que se encuentren en vigencia a la fecha de expedición de la presente Ley. Los contratos suscritos por estas instituciones, al amparo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, vigentes a la expedición de la presente Ley, continuarán siendo ejecutados hasta su terminación.

DUODÉCIMA.- Hasta que las instituciones públicas que se crean en la presente Ley, se encuentren operativas, continuarán interviniendo las actuales instituciones, en funciones prorrogadas al amparo de las normas legales por las que fueron creadas. Para el caso de las cooperativas bajo control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, en la transición el marco de la regulación será el existente a la fecha de vigencia de la presente Ley.

DÉCIMO TERCERA.- Los procesos judiciales a cargo de la Dirección Nacional de Cooperativas, Consejo Cooperativo Nacional y del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria - IEPS, que estuvieren siendo sustanciados ante los juzgados y

tribunales de justicia, serán asumidos por el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria que se crea en virtud de esta ley.

Los procesos judiciales a cargo de la Superintendencia de Bancos y Seguros y del Programa de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria, seguirán siendo actuados o defendidos por la misma Superintendencia y por la Corporación, respectivamente, hasta que entren en funcionamiento la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y la Corporación.

DÉCIMO CUARTA.- El Ministerio de Relaciones Laborales, dentro del plazo de noventa días de expedido el Reglamento de la presente Ley, determinará la estructura orgánica de las instituciones públicas que se crean en esta Ley.

DÉCIMO QUINTA.- El Ministerio de Finanzas, realizará las acciones y reformas presupuestarias correspondientes con el propósito de viabilizar la aplicación de la presente Ley.

DÉCIMO SEXTA.- El proceso de incorporación a la Superintendencia de economía Popular y solidaria de las cooperativas de ahorro y crédito que actualmente se encuentren bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, se iniciará a partir del requerimiento efectuado mediante resolución del Superintendente de Economía Popular y Solidaria; y, se ejecutará de acuerdo con el cronograma que se elaborará conjuntamente entre las dos superintendencias, cuidando que no se ponga en riesgo la reputación, el servicio a los socios, al público y que no vulneren los controles internos y de gobernabilidad.

Mientras se perfeccione la transferencia de funciones y documentos a que se refiere la presente disposición, las cooperativas señaladas seguirán bajo la regulación y control de la Superintendencia de Bancos y Seguros

DÉCIMO SÉPTIMA.- El Presidente de la República dictará el Reglamento de la presente Ley en el plazo de máximo de noventa días.

DÉCIMO OCTAVA.- Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, que al momento de expedición de la presente Ley, cuenten con socios que excedieran los porcentajes establecidos en el artículo 49, deberán, en el plazo de un año, adecuar el monto de sus aportaciones de capital a los porcentajes establecidos en el mencionado artículo.

DISPOSICIONES REFORMATARIAS

PRIMERA.- En la Ley de Régimen Tributario Interno a continuación del numeral 18 del artículo 9, agréguense los siguientes numerales:

"19.- Los ingresos percibidos por las organizaciones previstas en la Ley de Economía Popular y Solidaria siempre y cuando las utilidades obtenidas sean reinvertidas en la propia organización.

Para el efecto, se considerará:

a) Utilidades.- Los ingresos obtenidos en operaciones con terceros, luego de deducidos los correspondientes costos, gastos y deducciones adicionales, conforme lo dispuesto en esta Ley.

b) Excedentes.- Son los ingresos obtenidos en las actividades económicas realizadas con sus miembros, una vez deducidos los correspondientes costos, gastos y deducciones adicionales, conforme lo dispuesto en esta Ley.

Cuando una misma organización genere, durante un mismo ejercicio impositivo, utilidades y excedentes, podrá acogerse a esta exoneración, únicamente cuando su contabilidad permita diferenciar inequívocamente los ingresos y los costos y gastos relacionados con las utilidades y con los excedentes.

Se excluye de esta exoneración a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, quienes deberán liquidar y pagar el impuesto a la renta conforme la normativa tributaria vigente para sociedades.

20.- Los excedentes percibidos por los miembros de las organizaciones previstas en la Ley de Economía Popular y Solidaria, conforme las definiciones del numeral anterior."

SEGUNDA.- En la Ley de Régimen Tributario Interno en el artículo 10 numeral 11, sustituir el texto:

1. "Las provisiones serán deducibles hasta por el monto que la Junta Bancaria establezca." por el siguiente:

"Las provisiones serán deducibles hasta por el monto que la Junta Bancaria, para el Sector Financiero o la Junta de Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario, para el Sector Financiero Popular y Solidario, lo establezca."

2. "Si la Junta Bancaria estableciera que las provisiones han sido excesivas, podrá ordenar la reversión del excedente; este excedente no será deducible" por el siguiente:

"Si la Junta Bancaria o la Junta de Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario, en sus respectivos sectores, estableciera que las provisiones han sido excesivas, podrá ordenar la reversión del excedente; este excedente no será deducible"

TERCERA.- En Ley General de Instituciones del Sistema Financiero en los artículos 1, 2, 3, 73 y 214 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, suprimase, la frase "y las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el público".

CUARTA.- En la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera Reemplazar en el último inciso del tercer artículo innumerado del Título por los siguientes:

"El Gerente General de la Corporación del Seguro de Depósitos no podrá ejercer ninguna otra actividad pública o privada remunerada, salvo la docencia universitaria; y, no podrá formar parte de las instituciones del sistema financiero privado hasta después de un año de haber terminado sus funciones.

Los miembros del Directorio del COSEDE son delegados de libre designación y remoción por parte de las instituciones que representan y no serán funcionarios a tiempo completo de la COSEDE."

DEROGATORIAS

PRIMERA.- Se derogan:

1. La Ley de Cooperativas, publicada en el Registro Oficial No. 123 de 20 de septiembre de 1966 y su codificación del 2001.

2. El Decreto Supremo No. 6842, publicado en el Registro Oficial 123 del 20 de septiembre de 1966.

3. El Decreto Supremo No. 2572-A publicado en el Registro Oficial No. 615 de 26 de junio de 1978.

4. Los artículos 212 y 213 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, así como toda mención a cooperativas de ahorro y crédito contenida en dicha Ley. 63

5. El Decreto Ejecutivo No. 303, publicado en el Registro Oficial No. 85 de 16 de Mayo de 2007.

6. El Decreto Ejecutivo No. 1668, publicado en el Registro Oficial No. 577 de 24 de Abril de 2009.
7. El Decreto Ejecutivo No. 194, publicado en el Registro Oficial No. 111 de 19 de enero de 2010.
8. El Reglamento de Registro, Seguimiento y Control de las Entidades Financieras de las Comunidades, Pueblos, Naciones y Nacionalidades del Ecuador, publicado en el Registro Oficial No. 277 de 13 de Septiembre de 2010.

- **REGLAMENTO A LEY ORGÁNICA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA**

Decreto Ejecutivo 1061
Registro Oficial Suplemento 648 de 27-feb-2012
Estado: Vigente

Rafael Correa Delgado
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
Considerando:

Que la Constitución de la República en su artículo 283 establece que el sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine; y, que la economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios;

Que el artículo 147 de la Carta Magna dispone que es atribución y deber del Presidente Constitucional de la República el expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas;

Que de acuerdo con la Disposición Transitoria Décimo Séptima de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario el Presidente de la República debe dictar el reglamento a la ley; y,

En ejercicio de la atribución conferida en el artículo 147, número 13 de la Constitución de la República.

Decreta:

Expedir el siguiente REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGANICA DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO

Título I

Del Ambito

Art. 1.- Ambito y objeto.- El presente reglamento general tiene por objeto establecer los procedimientos de aplicación de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.

Título II

De las Formas de Organización de la Economía Popular y Solidaria

Capítulo I

Normas Comunes a las Formas de Organización de la Economía Popular y Solidaria

Sección I

Constitución

Art. 2.- Asamblea Constitutiva.- Para constituir una de las organizaciones sujetas a la ley, se realizará una asamblea constitutiva con las personas interesadas, quienes, en forma expresa, manifestarán su deseo de conformar la organización y elegirán un Directorio provisional integrado por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, que se encargarán de gestionar la aprobación del estatuto social y la obtención de personalidad jurídica ante la Superintendencia.

Art. 3.- Acta Constitutiva.- El acta de la asamblea constitutiva a que se refiere el artículo anterior, contendrá lo siguiente:

1. Lugar y fecha de constitución;
2. Expresión libre y voluntaria de constituir la organización;
3. Denominación, domicilio y duración;
4. Objeto social;
5. Monto del fondo o capital social inicial;
6. Nombres, apellidos, nacionalidad, número de cédula de identidad de los fundadores;
7. Nómina de la Directiva provisional; y,
8. Firma de los integrantes fundadores o sus apoderados.

Art. 4.- Reserva de denominación.- Las asociaciones EPS y cooperativas en formación, reservarán en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en coordinación con la Superintendencia de Compañías, el uso de una denominación por el plazo de noventa días dentro de los cuales presentarán la documentación para el otorgamiento de la personalidad jurídica.

En el caso de las cooperativas de transporte, la reserva se mantendrá vigente por un año.

Art. 5.- Requisitos organizaciones comunitarias.- Las organizaciones comunitarias para la obtención de personalidad jurídica presentarán ante la Superintendencia una solicitud, junto con el acta constitutiva, suscrita al menos por diez miembros fundadores y copia de la cédula de identidad del representante provisional y el certificado de depósito del aporte del fondo social inicial por el monto fijado por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social.

Art. 6.- Requisitos asociaciones EPS.- Las asociaciones EPS, por su parte presentarán los siguientes documentos:

1. Solicitud de constitución;
2. Reserva de denominación;
3. Acta constitutiva, suscrita por un mínimo de diez asociados fundadores;
4. Lista de fundadores, incluyendo, nombres, apellidos, ocupación, número de cédula, aporte inicial y firma;
5. Estatuto social, en dos ejemplares; y,
6. Certificado de depósito del aporte del capital social inicial, por el monto fijado por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, efectuado, preferentemente, en una cooperativa de ahorro y crédito.

Art. 7.- Requisitos cooperativas.- Las cooperativas a través de su Presidente provisional, además de los requisitos exigidos a las asociaciones presentarán los siguientes documentos:

1. Estudio técnico, económico y financiero que demuestre la viabilidad de constitución de la cooperativa y plan de trabajo;
2. Declaración simple efectuada y firmada por los socios de no encontrarse incursos en impedimento para pertenecer a la cooperativa; y,
3. Informe favorable de autoridad competente, cuando de acuerdo con el objeto social, sea necesario. Para el caso de cooperativas de transporte se contará con el informe técnico favorable, emitido por la Agencia Nacional de Tránsito o la autoridad que corresponda.

Además deberán cumplir con los siguientes mínimos de socios y capital:

1. Cooperativas de transportes en cabeceras cantonales o parroquias con población de hasta 50.000 habitantes, veinte socios y un monto mínimo equivalente a cuarenta salarios básicos unificados de capital social inicial;
2. Cooperativas de transportes en cabeceras cantonales con población superior a 50.000 hasta 100.000 habitantes, cuarenta socios y un monto mínimo equivalente a ciento sesenta salarios básicos unificados de capital social inicial;
3. Cooperativas de transportes en cabeceras cantonales con población superior a 100.000 habitantes sesenta socios y un monto mínimo equivalente a doscientos cuarenta salarios básicos unificados de capital social inicial;
4. Para la constitución de cooperativas de ahorro y crédito, además de los requisitos señalados en el presente reglamento, se requerirá un mínimo de 50 socios y un capital social inicial, equivalente a doscientos salarios básicos unificados; y,
5. Las cooperativas de las restantes clases, se constituirán con un mínimo de veinte socios y un monto mínimo equivalente a cuatro salarios básicos unificados de capital social inicial.

Art. 8.- Trámite de aprobación.- La Superintendencia si la documentación cumple con los requisitos exigidos en el presente reglamento admitirá a trámite la solicitud de constitución. En el término de treinta días, la Superintendencia efectuará el análisis de la documentación y, en caso de ser necesario, realizará una verificación in situ, luego de lo cual elaborará la resolución que niegue o conceda la personalidad jurídica a la organización y, en este último caso, notificará al Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social para su inscripción en el Registro Público.

Si la documentación no cumpliera con los requisitos, se concederá un término de treinta días adicionales para completarla; y, en caso de no hacerlo, dispondrá su devolución.

La Superintendencia mediante resolución, negará el otorgamiento de personalidad jurídica a una cooperativa, cuando determine que su constitución no es viable, por las causas establecidas en el informe técnico respectivo.

Art. 9.- Notificación para registro.- La Superintendencia una vez emitida la resolución de concesión de personalidad jurídica de una organización, comunicará del particular al Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, para el registro correspondiente.

Art. 10.- Registro Público.- El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, será el responsable del Registro Público de las personas y organizaciones, sujetas a la ley, que se llevará en forma numérica y secuencial.

Los emprendimientos unipersonales, familiares o domésticos se registrarán presentando una declaración suscrita por el titular de la unidad, en la que conste el tipo de actividad, los nombres y apellidos de los integrantes y copia de la cédula.

Los emprendimientos unipersonales, familiares o domésticos, cuyos titulares sean ciudadanos en situación de movilidad, deberán presentar además, el pasaporte y el documento que acredite el estatus migratorio, cuando sea procedente.

Los comerciantes minoristas y artesanos se registrarán presentando el documento que acredite el cumplimiento de las condiciones previstas en la ley.

Art. 11.- Personalidad jurídica.- La personalidad jurídica otorgada a las organizaciones amparadas por la ley, les confiere la capacidad legal para adquirir derechos, contraer obligaciones y acceder a los beneficios que la ley les concede, en el ejercicio de las actividades de su objeto social.

Art. 12.- Autorización de funcionamiento.- La Superintendencia, simultáneamente con el registro de directivos y representante legal, emitirá la autorización de funcionamiento que será exhibida en la oficina principal de la organización. En la misma forma se procederá con la autorización de funcionamiento de oficinas operativas.

Art. 13.- Transformación.- Las organizaciones amparadas por la ley, podrán transformarse en otra de las formas previstas en la misma, mediante la aprobación de, al menos, las dos terceras partes del máximo órgano de gobierno, en sesión convocada especialmente para el efecto.

Sección II

Disolución y Liquidación

Art. 14.- Disolución voluntaria.- La disolución voluntaria de las organizaciones sujetas a la ley y la designación del liquidador, serán resueltas en sesión del máximo órgano de gobierno, convocada, expresamente para el efecto y con el voto de al menos las dos terceras partes de sus integrantes.

En el acta de la sesión constarán el nombre del liquidador, los nombres, apellidos, número de cédula y firma de los asistentes. Una copia certificada del acta, será puesta en conocimiento de la Superintendencia.

Art. 15.- Registro de nombramiento de liquidador.- La Superintendencia en la resolución que declare disuelta la organización registrará el nombramiento del liquidador, facultándole el ejercicio de la representación legal mientras dure el proceso de liquidación.

Art. 16.- Destino de los bienes inmuebles de la organización en liquidación.- Los bienes inmuebles de las organizaciones sujetas a la ley, obtenidos mediante donación y que se constituyeren en sobrantes luego del proceso de liquidación, no serán susceptibles de reparto entre sus integrantes, y deberán ser donados a otra entidad local, sin fin de lucro y con objeto social similar, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto.

La Superintendencia dictará normas que permitan identificar contablemente los bienes ingresados al Fondo Irrepartible de Reserva como donaciones a favor de la organización.

Art. 17.- Cancelación de registro.- La Superintendencia, una vez que apruebe el informe final del liquidador, dispondrá la cancelación del registro de la organización, declarándola extinguida de pleno derecho y notificando del particular al Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, para que, igualmente, cancele su registro en esa entidad.

Capítulo III

Estructura Interna de las Organizaciones del Sector Asociativo

Art. 18.- Órgano de gobierno.- El órgano de gobierno de las asociaciones EPS estará integrado por todos los asociados, quienes se reunirán ordinariamente cuando menos,

una vez al año y, extraordinariamente, cuantas veces sea necesario. Sus decisiones serán obligatorias, para los órganos directivos, de control, administrador y la totalidad de sus integrantes.

Art. 19.- Órgano directivo.- El órgano directivo de las asociaciones EPS, será electo por el órgano de gobierno y estará integrado por un mínimo de tres y máximo de cinco asociados, quienes se reunirán, ordinariamente, cuando menos, una vez cada trimestre y, extraordinariamente, cuantas veces sea necesario, previa convocatoria efectuada por el Presidente, señalando el orden del día a tratarse.

Art. 20.- Órgano de control.- Los integrantes del órgano de control de las asociaciones EPS, serán elegidos por el órgano de gobierno, en un número no mayor de tres asociados, quienes se reunirán, ordinariamente, cuando menos, una vez cada trimestre y, extraordinariamente, cuantas veces sea necesario, previa convocatoria efectuada por el Presidente de dicho órgano, señalando el orden del día a tratarse.

Art. 21.- Control interno.- El control interno de las asociaciones EPS, además del efectuado por su propio órgano de control, será ejercido por la Auditoría Interna cuando sea procedente de acuerdo a lo previsto en el presente reglamento y conforme lo determinado, para el efecto, en las cooperativas.

Art. 22.- Administrador.- El Administrador, bajo cualquier denominación, será elegido por el órgano de gobierno y será el representante legal de la asociación EPS.

Será responsable de cumplir y hacer cumplir a los asociados, las disposiciones emanadas de los órganos de gobierno, directivo y de control de la asociación EPS.

El Administrador deberá presentar un informe administrativo y los estados financieros semestrales para consideración de los órganos de gobierno y control.

El Administrador de la Asociación EPS está obligado a entregar a los asociados en cualquier momento la información que esté a su cargo y que se le requiera.

Art. 23.- Funcionamiento.- El número de vocales y el período de duración de los órganos directivos y de control, así como sus atribuciones y deberes al igual que las funciones del administrador constarán en el estatuto social de la asociación.

Capítulo IV

De las Organizaciones del Sector Cooperativo

Sección I

Socios

Art. 24.- Ingreso y registro de socios.- El Consejo de Administración de la cooperativa o del organismo de integración, aceptará o rechazará, en un plazo de treinta días, las solicitudes de ingresos de nuevos socios. El Gerente, dentro de los siguientes quince días, solicitará a la Superintendencia el registro de los nuevos socios, adjuntando una certificación del secretario de la cooperativa, que acredite el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y estatutarios.

La Superintendencia, en cualquier tiempo, verificará el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y estatutarios y, en caso de incumplimiento, aplicará las sanciones previstas en la ley, al Secretario y vocales del Consejo de Administración, dejará sin efecto el registro y ordenará la separación del socio.

Art. 25.- Pérdida de la calidad de socio.- La solicitud de retiro voluntario surtirá efecto, transcurridos treinta días de su presentación, en caso de falta de aceptación por parte del Consejo de Administración.

La exclusión será resuelta por la asamblea general, en caso de graves infracciones a la ley, el presente reglamento o el estatuto social. De esta resolución, el afectado podrá apelar ante la Superintendencia dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación con la exclusión.

En caso de fallecimiento de un socio la cooperativa dispondrá la liquidación de haberes del fallecido o podrá aceptar que sea sustituido por uno de los herederos que, cumpliendo los requisitos estatutarios y, previo acuerdo de los restantes herederos, sea debidamente aceptado por el Consejo de Administración.

Art. 26.- Liquidación y reembolso de haberes.- La liquidación de haberes de quienes hayan perdido la calidad de socio por cualquier causa, y el reembolso correspondiente, son obligatorias y se efectuará dentro de los noventa días siguientes, salvo en caso de apelación, en que el plazo transcurrirá a partir de la resolución dictada por la Superintendencia. La suma anual de reembolsos de haberes, por retiros voluntarios o exclusiones, no podrá exceder del 5% del capital social de la cooperativa.

Sin perjuicio de lo expuesto en el presente artículo, quien solicite su retiro voluntario, podrá recomendar a la cooperativa el ingreso de un reemplazante quien, previa aceptación como socio por parte del consejo de administración y habiendo cancelado la cuota de ingreso que corresponda, adquirirá las aportaciones del socio renunciante.

Art. 27.- Componentes de la liquidación.- En la liquidación de haberes, se considerará el monto de los certificados de aportación que posea el socio, los ahorros y depósitos de cualquier naturaleza, con excepción de los aportes para gastos de administración; y, los que por su naturaleza tengan el carácter de no reembolsables.

Los certificados de aportación además de los aportes de capital, incluirán las cuotas destinadas a la adquisición, construcción o remodelación de bienes inmuebles o para la ejecución de obras de urbanización en los mismos.

Sección II

Organización Interna

Parágrafo I

De la Asamblea General

Art. 28.- Asamblea general.- La Asamblea general es el órgano de gobierno de la cooperativa y sus decisiones obligan a los directivos, administradores y socios, siempre que estas decisiones no sean contrarias a la ley, al presente reglamento o al estatuto social de la cooperativa.

Art. 29.- Atribuciones y deberes de la asamblea general.- Son atribuciones y deberes de la Asamblea General:

1. Aprobar y reformar el estatuto social, el reglamento interno y el de elecciones;
2. Elegir a los miembros de los consejos de Administración y Vigilancia;
3. Remover a los miembros de los consejos de Administración, Vigilancia y Gerente, con causa justa, en cualquier momento y con el voto secreto de más de la mitad de sus integrantes;
4. Nombrar auditor interno y externo de la terna que presentará, a su consideración, el Consejo de Vigilancia;

5. Aprobar o rechazar los estados financieros y los informes de los consejos y de Gerencia. El rechazo de los informes de gestión, implica automáticamente la remoción del directivo o directivos responsables, con el voto de más de la mitad de los integrantes de la asamblea;
6. Conocer el plan estratégico y el plan operativo anual con su presupuesto, presentados por el Consejo de Administración;
7. Autorizar la adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la cooperativa, o la contratación de bienes o servicios, cuyos montos le corresponda según el estatuto social o el reglamento interno;
8. Conocer y resolver sobre los informes de Auditoría Interna y Externa;
9. Decidir la distribución de los excedentes, de conformidad con la ley, este reglamento, y el estatuto social;
10. Resolver las apelaciones de los socios referentes a suspensiones de derechos políticos internos de la institución;
11. Definir el número y el valor mínimo de aportaciones que deberán suscribir y pagar los socios;
12. Aprobar el reglamento que regule dietas, viáticos, movilización y gastos de representación del Presidente y directivos, que, en conjunto, no podrán exceder, del 10% del presupuesto para gastos de administración de la cooperativa;
13. Resolver la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación;
14. Elegir a la persona natural o jurídica que se responsabilizará de la auditoría interna o efectuará la auditoría externa anual, de la terna de auditores seleccionados por el Consejo de Vigilancia de entre los calificados por la Superintendencia. En caso de ausencia definitiva del auditor interno, la Asamblea General procederá a designar su reemplazo, dentro de treinta días de producida ésta. Los auditores externos serán contratados por periodos anuales; y,
15. Las demás establecidas en la ley, este reglamento y el estatuto social.

Art. 30.- Clases de asambleas.- Las asambleas generales, serán ordinarias, extraordinarias e informativas.

Las asambleas generales ordinarias se reunirán por lo menos dos veces al año. En la primera asamblea anual, que se reunirá dentro de los primeros tres meses del año, se conocerá, aprobará o rechazará los informes económicos y de gestión del Gerente y directivos; los estados financieros; se elegirá a los consejeros, cuando proceda estatutariamente, y se tratará cualquier otro asunto que conste en el orden del día determinado en la convocatoria.

Las asambleas generales ordinarias de las cooperativas de ahorro y crédito, podrán efectuarse anualmente.

Las asambleas generales extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria.

Art. 31.- Votaciones.- La elección y remoción de directivos o Gerente y la exclusión de socios, se efectuará en votación secreta.

Los miembros de los consejos y comisiones, tendrán únicamente derecho a voz informativa, en la aprobación de sus informes, balances o en asuntos en que se juzgue su posible responsabilidad por infracciones legales o estatutarias.

Art. 32.- Mayorías.- Las resoluciones de la asamblea general y de los consejos, se tomarán con el voto favorable de más de la mitad de los asistentes, salvo los casos previstos en la ley, el presente reglamento y el estatuto social de las cooperativas.

Art. 33.- Elecciones, asambleas, delegaciones de asistencias.- Las elecciones de representantes, la organización y funcionamiento de las asambleas informativas y los aspectos tales como convocatoria, quórum y orden del día; así como las delegaciones de asistencia a las asambleas generales y de representantes serán establecidos por el órgano regulador.

Parágrafo II

Del Consejo de Administración

Art. 34.- Atribuciones y deberes.- El Consejo de Administración tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

1. Cumplir y hacer cumplir los principios establecidos en el artículo 4 de la ley y a los valores y principios del cooperativismo;
2. Planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa;
3. Aprobar políticas institucionales y metodologías de trabajo;
4. Proponer a la asamblea reformas al estatuto social y reglamentos que sean de su competencia;
5. Dictar los reglamentos de administración y organización internas, no asignados a la Asamblea General;
6. Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de socios;
7. Sancionar a los socios de acuerdo con las causas y el procedimiento establecidos en el estatuto social. La sanción con suspensión de derechos, no incluye el derecho al trabajo. La presentación del recurso de apelación, ante la Asamblea General, suspende la aplicación de la sanción;
8. Designar al Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administración; y comisiones o comités especiales y removerlos cuando inobservaren la normativa legal y reglamentaria;
9. Nombrar al Gerente y Gerente subrogante y fijar su retribución económica;
10. Fijar el monto y forma de las cauciones, determinando los funcionarios obligados a rendirlas;
11. Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios, en la cuantía que fije el estatuto social o el reglamento interno;
12. Aprobar el plan estratégico, el plan operativo anual y su presupuesto y someterlo a conocimiento de la Asamblea General;
13. Resolver la afiliación o desafiliación a organismos de integración representativa o económica;
14. Conocer y resolver sobre los informes mensuales del Gerente;
15. Resolver la apertura y cierre de oficinas operativas de la cooperativa e informar a la Asamblea General;
16. Autorizar el otorgamiento de poderes por parte del Gerente;
17. Informar sus resoluciones al Consejo de Vigilancia para efectos de lo dispuesto en el número 9 del artículo 38 del presente reglamento;
18. Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la cooperativa con sus respectivos presupuestos; y,
19. Las demás atribuciones que le señale la ley, el presente reglamento y el estatuto social y aquellas que no estén atribuidas a ningún otro organismo de la cooperativa.

Art. 35.- Número de vocales.- El Consejo de Administración, tendrá un número variable e impar de vocales, en la siguiente forma:

1. En las cooperativas que tengan hasta mil socios, un mínimo de tres y un máximo de siete vocales principales y sus respectivos suplentes, conforme lo determine su estatuto; y,
2. En las cooperativas que tengan más de mil socios, un mínimo de cinco y un máximo de nueve vocales principales y sus respectivos suplentes, conforme lo determine su estatuto. El número de vocales del consejo, será renovado parcialmente, de manera que, en cada elección, con excepción de la primera, se elegirán las mayorías y minorías, alternativamente.

Parágrafo III

De la Presidencia

Art. 36.- Presidente.- Para ser elegido Presidente de una cooperativa, se requiere haber ejercido la calidad de socio, por lo menos dos años antes de su elección y recibir capacitación en áreas de su competencia antes de su posesión. Será elegido por el Consejo de Administración de entre sus miembros y podrá ser removido, en cualquier tiempo por causas debidamente justificadas, con el voto secreto de más de la mitad de los vocales del Consejo de Administración.

En caso de ausencia temporal o definitiva, será subrogado por el Vicepresidente que, deberá reunir los mismos requisitos que el Presidente.

El Presidente durará en su función el periodo señalado en el estatuto social de la cooperativa.

Art. 37.- Atribuciones y responsabilidades.- Son atribuciones y responsabilidades del Presidente:

1. Convocar, presidir y orientar las discusiones en las asambleas generales y en las reuniones del Consejo de Administración;
2. Dirimir con su voto los empates en las votaciones de asamblea general;
3. Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa; y,
4. Suscribir los cheques conjuntamente con el Gerente, cuando así lo disponga el estatuto social.

Parágrafo IV

Del Consejo de Vigilancia

Art. 38.- Atribuciones y deberes.- El Consejo de Vigilancia, tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

1. Nombrar de su seno al Presidente y Secretario del Consejo;
2. Controlar las actividades económicas de la cooperativa;
3. Vigilar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas técnicas y legales vigentes;
4. Realizar controles concurrentes y posteriores sobre los procedimientos de contratación y ejecución, efectuados por la cooperativa;
5. Efectuar las funciones de auditoría interna, en los casos de cooperativas que no excedan de 200 socios o 500.000 dólares de activos;
6. Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría, debidamente aceptadas;
7. Presentar a la asamblea general un informe conteniendo su opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros y la gestión de la cooperativa;
8. Proponer ante la asamblea general, la terna para la designación de auditor interno y externo y, motivadamente, la remoción de los directivos o Gerente;

9. Observar cuando las resoluciones y decisiones del Consejo de Administración y del Gerente, en su orden, no guarden conformidad con lo resuelto por la asamblea general, contando previamente con los criterios de la gerencia;
 10. Informar al Consejo de Administración y a la asamblea general, sobre los riesgos que puedan afectar a la cooperativa;
 11. Solicitar al Presidente que se incluya en el orden del día de la próxima asamblea general, los puntos que crea conveniente, siempre y cuando estén relacionados directamente con el cumplimiento de sus funciones; y,
 12. Las demás establecidas en la ley, este reglamento y el estatuto social.
- Sin perjuicio de las observaciones formuladas por el Consejo de Vigilancia, el Consejo de Administración podrá ejecutar sus resoluciones bajo su responsabilidad, no obstante lo cual, esta decisión deberá ser, obligatoriamente, puesta en conocimiento de la siguiente asamblea general.

Art. 39.- Número de vocales.- El Consejo de Vigilancia tendrá un número mínimo de tres y un máximo de cinco vocales principales con sus respectivos suplentes, conforme lo determine el estatuto social de la cooperativa.

El número de vocales del Consejo, será renovado parcialmente, de manera que, en cada elección, con excepción de la primera, se elegirán las mayorías y minorías, alternativamente.

Parágrafo V

Normas comunes para representantes y vocales

Art. 40.- Elección y reelección de representantes y vocales.- Los representantes a la asamblea general y los vocales de los consejos, serán elegidos para el periodo señalado en el estatuto social, pudiendo ser reelegidos por una sola vez consecutiva y cuando concluyan su segundo periodo, no podrán ser elegidos para ningún cargo directivo hasta después de un periodo.

En las elecciones de vocales de los consejos, la representación será proporcional al número de socios que integre cada grupo, sector o distrito en que se haya organizado la cooperativa, de acuerdo con su reglamento de elecciones.

Art. 41.- Requisitos.- En el estatuto social de la cooperativa, se determinarán los requisitos para ser vocal de los consejos que contemplarán un tiempo mínimo de pertenencia a la cooperativa; y, acreditar capacitación en el área de sus funciones, antes de su posesión, por un tiempo no inferior a veinte horas, así como también las causales y procedimiento de remoción y subrogación, sin perjuicio de requisitos de profesionalización que pueden ser determinados por el ente regulador de acuerdo con el nivel o segmento al que pertenezca la cooperativa.

En los consejos no podrán ser elegidos socios que tengan, entre sí, relación conyugal, unión de hecho, o parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Art. 42.- Remoción de vocales.- Los vocales de los consejos que, sin justificación, no asistieren a tres sesiones consecutivas o seis no consecutivas durante un año, perderán su calidad y serán reemplazados por el vocal suplente, por el tiempo que falte para completar su período.

Art. 43.- Prohibiciones.- Los representantes, vocales de los consejos, comisiones y gerentes, que hayan sido destituidos de su cargo por infracciones legales, reglamentarias

o estatutarias, no podrán ocupar similares cargos en ninguna cooperativa, dentro de los cuatro años siguientes.

Parágrafo VI

De la Gerencia

Artículo 44.- Atribuciones y responsabilidades.- Son atribuciones y responsabilidades del Gerente:

1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa de conformidad con la ley, este reglamento y el estatuto social de la misma;
2. Proponer al Consejo de Administración las políticas, reglamentos y procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa;
3. Presentar al Consejo de Administración el plan estratégico, el plan operativo y su pro forma presupuestaria; los dos últimos máximo hasta el treinta de noviembre del año en curso para el ejercicio económico siguiente;
4. Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la cooperativa e informar mensualmente al Consejo de Administración;
5. Contratar, aceptar renuncias y dar por terminado contratos de trabajadores, cuya designación o remoción no corresponda a otros organismos de la cooperativa y de acuerdo con las políticas que fije el Consejo de Administración;
6. Diseñar y administrar la política salarial de la cooperativa, en base a la disponibilidad financiera;
7. Mantener actualizado el registro de certificados de aportación;
8. Informar de su gestión a la asamblea general y al Consejo de Administración;
9. Suscribir los cheques de la cooperativa, individual o conjuntamente con el Presidente, conforme lo determine el estatuto social. Cuando el estatuto social disponga la suscripción individual, podrá delegar esta atribución a administradores de sucursales o agencias, conforme lo determine la normativa interna;
10. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de los órganos directivos;
11. Contraer obligaciones a nombre de la cooperativa, hasta el monto que el estatuto, reglamento o la asamblea general le autorice;
12. Suministrar la información personal requerida por los socios, órganos internos de la cooperativa o por la Superintendencia;
13. Definir y mantener un sistema de control interno que asegure la gestión eficiente y económica de la cooperativa;
14. Informar a los socios sobre el funcionamiento de la cooperativa;
15. Asistir, obligatoriamente, a las sesiones del Consejo de Administración, con voz informativa, salvo que dicho consejo excepcionalmente disponga lo contrario; y, a las del Consejo de Vigilancia, cuando sea requerido; y,
16. Las demás que señale la ley, el presente reglamento y el estatuto social de la cooperativa.

Art. 45.- Requisitos.- Sin perjuicio de los requisitos que se determinen en el estatuto social de la cooperativa, el Gerente deberá acreditar experiencia en gestión administrativa, acorde con el tipo, nivel o segmento de la cooperativa y capacitación en economía solidaria y cooperativismo. Previo al registro de su nombramiento, deberá rendir la caución que corresponda.

Se prohíbe la designación de Gerente a quien tenga la calidad de cónyuge, conviviente en unión de hecho, o parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con algún vocal de los consejos.

Parágrafo VII

De las Comisiones Especiales

Art. 46.- Comisiones especiales.- El Consejo de Administración, podrá conformar las comisiones que estime necesarias para el buen funcionamiento de la cooperativa, que estarán integradas por tres vocales que durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos por una sola vez y que cumplirán las tareas asignadas por dicho consejo. Todas las cooperativas tendrán una comisión de educación; y, las de ahorro y crédito, los comités y comisiones necesarios para su adecuado funcionamiento.

Sección IV

De la Fusión, Escisión, Disolución, Liquidación y Reactivación

Parágrafo I

De la Fusión

Art. 47.- Fusión.- La fusión se resolverá en asambleas generales de las cooperativas a fusionarse, convocadas especialmente para ese efecto. La fusión podrá decidirse en cualquier tiempo, con el voto de las dos terceras partes de los socios o representantes.

Art. 48.- Formas de fusión.- La fusión se puede realizar de las siguientes maneras:

1. Por creación, esto es, cuando las cooperativas se disuelven sin liquidarse, constituyendo una nueva de la misma o distinta clase; y,
2. Por absorción, cuando una o más cooperativas, son absorbidas por otra que mantiene su personalidad jurídica.

En cualquiera de los dos casos, la organización creada o absorbente, asumirá los activos, pasivos y patrimonio de las disueltas, entregándose certificados de aportación a los socios, en la proporción que les corresponda en la nueva organización.

Art. 49.- Aprobación de balances y transferencias de activos y pasivos.- En las asambleas generales en que se resuelva la fusión, se aprobarán los estados financieros, se resolverán las transferencias de activos, pasivos y patrimonios a la organización creada o absorbente, además de la distribución de certificados de aportación y las compensaciones que se acordaren, sean en numerario, bienes o sustitución de pasivos.

Art. 50.- Asamblea conjunta.- Resuelta la fusión se realizará una asamblea general conjunta de los socios de las cooperativas, en la que se aprobará el estado financiero inicial consolidado de la naciente institución, el estatuto social de la misma y se elegirán los vocales de los consejos.

Art. 51.- Aprobación de fusión.- La Superintendencia aprobará la fusión y las correspondientes reformas estatutarias y distribución de capital social en aportaciones, resolución que, en tratándose de bienes inmuebles, será inscrita en el Registro de la Propiedad y constituirá título de dominio.

En la misma resolución de aprobación de la cooperativa creada o absorbente, se dispondrá la cancelación del registro de las absorbidas o de las fusionadas, la inscripción de la cooperativa naciente en el registro público y el registro de la directiva y Gerente.

Parágrafo II

De la escisión

Art. 52.- Escisión.- La escisión será resuelta en asamblea general, convocada especialmente para ese efecto y con el voto de las dos terceras partes de los socios o representantes.

La asamblea general de socios o de representantes, podrá acordar la escisión en una o más cooperativas, de la misma o diferente clase, para lo cual deberá aprobar lo siguiente:

1. Los estados financieros de la cooperativa;
2. La división de los activos, pasivos y patrimonio de la cooperativa, su adjudicación y las compensaciones a que hubiere lugar entre ésta y la o las que se crearen;
3. Los estados financieros iniciales de las nuevas cooperativas;
4. El estatuto social de las nuevas cooperativas a formarse; y,
5. La forma de saneamiento o sustitución de las deudas que existieren con cargo a la cooperativa escindida.

Art. 53.- Aprobación.- La Superintendencia, mediante resolución, aprobará la escisión y los correspondientes estatutos y distribución del patrimonio. Esta resolución, en tratándose de bienes inmuebles, será inscrita en el Registro de la Propiedad y constituirá título de dominio.

Parágrafo III

De la Disolución y Liquidación

Art. 54.- Disolución por sentencia judicial.- La disolución por sentencia judicial, se llevará a efecto, cuando se haya ejecutoriado la sentencia o el auto de quiebra declarados por el Juez competente.

Art. 55.- Resolución de la Superintendencia.- La Superintendencia, podrá resolver, de oficio, o a petición de parte, en forma motivada, la disolución y consiguiente liquidación de una cooperativa, por las causales previstas en el artículo 57 de la ley o una de las siguientes:

1. Por la reducción del número de socios a menos del mínimo legal, siempre que no se incorporen nuevos socios o resuelva su fusión en el plazo de tres meses; y,
2. Por la falta de remisión de los informes que le fueren requeridos por la Superintendencia.

Art. 56.- Publicidad.- La resolución de disolución de una cooperativa, será publicada, por una sola vez, en uno de los diarios de amplia circulación, en el domicilio de la cooperativa y en los lugares donde tenga sucursales.

Art. 57.- Nombramiento y remoción del liquidador.- La Superintendencia, en la resolución de liquidación, nombrará al liquidador o ratificará al designado por la asamblea general, cuando se trate de liquidación voluntaria y fijará el monto de la caución que deba rendir.

La Superintendencia designará un nuevo liquidador, si el nombrado por la asamblea general, no se posesionare, dentro del término de quince días, contados desde la inscripción de la resolución de disolución y liquidación o no fuere conveniente para los intereses de la institución.

La Superintendencia podrá remover al liquidador, en cualquier tiempo, por incumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de su responsabilidad civil y penal.

Art. 58.- Honorarios.- La Superintendencia fijará los honorarios del liquidador, de conformidad con la tabla que elaborará para el efecto, tomando en consideración los siguientes criterios:

1. Monto de activos, pasivos y patrimonio al momento de la disolución;
2. Número de oficinas operativas; y,
3. Ambito geográfico de actividades de la cooperativa.

Cuando la disolución y liquidación obedeciere a quiebra o deterioro patrimonial insubsanable, la Superintendencia podrá designar como liquidador a uno de los servidores públicos de la misma, quien, en el ejercicio de estas actividades, no percibirá remuneración adicional alguna, ni adquirirá relación de dependencia con la organización, pues para estos efectos se considera parte de las funciones propias de su cargo.

Art. 59.- Atribuciones y responsabilidades.- Son atribuciones y responsabilidades del liquidador, las siguientes:

1. Suscribir, conjuntamente con el último Gerente, el acta de entrega-recepción de bienes y el estado financiero de liquidación de la cooperativa, al iniciar sus funciones;
2. Enajenar la totalidad de activos de la cooperativa y, en caso de bienes inmuebles, previa autorización de la Superintendencia y concurso de precios;
3. Cobrar las deudas a favor de la cooperativa, incluyendo los saldos adeudados por los socios;
4. Liquidar los haberes a los trabajadores, suscribiendo las respectivas actas de liquidación y finiquito;
5. Cancelar las deudas a los acreedores;
6. Mantener bajo su custodia y llevar los libros de contabilidad y correspondencia de la cooperativa;
7. Celebrar los actos y contratos necesarios para la liquidación de la cooperativa;
8. Informar trimestralmente a la Superintendencia y a los socios, sobre el estado de la liquidación; y,
9. Presentar el informe y balance de liquidación finales.

En caso de imposibilidad de la suscripción a que se refiere el número 1 del presente artículo, se dejará constancia de ello, conjuntamente con el informe del auditor designado por la Superintendencia.

Art. 60.- Falta de entrega de bienes.- El Superintendente de conformidad con la ley podrá sancionar a los directivos y Gerente, cuando en un plazo de cinco días laborables de solicitada la entrega recepción de bienes por parte del liquidador, sin causa justificada, no lo hicieren, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por dicho incumplimiento y podrá ordenar además la entrega – recepción presunta.

Art. 61.- Notificación a acreedores y socios.- El liquidador notificará, mediante publicación, en un periódico de amplia circulación u otro medio de comunicación en el lugar del domicilio de la cooperativa y en los que tenga sucursales, a los acreedores y socios para que, en el término de treinta días, justifiquen documentadamente sus acreencias o reclamen sus derechos.

Transcurrido dicho término, el liquidador tomará en cuenta solamente a los acreedores que hayan justificado esa calidad y a los que aparezcan reconocidos como tales en la contabilidad de la cooperativa.

Art. 62.- Información periódica.- El liquidador, por iniciativa propia o por disposición de la Superintendencia, podrá convocar y presidir, asambleas generales, en las que, informará documentadamente sobre los avances de la liquidación.

Art. 63.- Cancelación de pasivos.- El liquidador, conforme se vayan enajenando los activos, irá cancelando los pasivos, aplicando para ello, las normas sobre prelación de créditos que serán dictadas por la autoridad reguladora.

El liquidador, luego de cancelados los pasivos y en caso de existir sobrantes, podrá devolver las aportaciones y su alícuota patrimonial a los socios y si estos no lo reclamaren en el plazo de noventa días de efectuada la liquidación, serán depositados en la cuenta de la Superintendencia, que los destinará para cumplimiento de sus objetivos.

Art. 64.- Informe final.- El liquidador presentará a la asamblea general y a la Superintendencia un informe final de su gestión que incluirá el estado financiero de situación final y el balance de pérdidas y ganancias debidamente auditados, con la distribución del saldo patrimonial, de ser el caso.

Parágrafo IV De la Reactivación

Art. 65.- Requisitos para reactivación.- Para la reactivación de una cooperativa se deberá cumplir cualquiera de los siguientes requisitos:

1. Petición de al menos el cincuenta por ciento (50%) de los socios;
2. Petición del liquidador; y,
3. No haber transcurrido más de un año de la posesión del liquidador.

Art. 66.- Supervisión in situ y resolución.- La Superintendencia antes de resolver la petición de reactivación, evaluará las condiciones en que se encuentra la cooperativa y las posibilidades de efectivo cumplimiento de su objetivo social. La resolución de reactivación, se publicará en uno de los diarios de amplia circulación u otros medios de comunicación, en el domicilio de la cooperativa y de sus sucursales, en caso de haberlas.

Art. 67.- Convocatoria a elecciones.- Ejecutoriada la resolución de reactivación, el liquidador convocará a asamblea general de socios, para elegir a los directivos y nombrar al representante legal y efectuar la entrega de los bienes.

Sección V Regularización e Intervención

Art. 68.- Causas para la regularización.- La Superintendencia dispondrá que las cooperativas se sometan a un plan de regularización, cuando incurran en una de las siguientes causas:

1. Por incumplimiento de la ley, del presente reglamento, de las regulaciones, de su propio estatuto social o de las disposiciones de la Superintendencia, que pongan en riesgo la estabilidad institucional o derechos de los socios o de terceros;
2. Cuando los estados financieros reflejen pérdidas por dos semestres consecutivos;
3. Cuando en los informes de supervisión auxiliar, auditoría o de inspecciones, se determinen graves deficiencias de control interno, problemas financieros, administrativos o entre socios y directivos, que pongan en riesgo la estabilidad institucional; y,
4. Cuando la Superintendencia detectare ocultamientos de deficiencias en los informes de auditoría interna o externa, sin perjuicio de la sanción que se impondrá al auditor y la responsabilidad civil o penal, en que pudiera incurrir.

Art. 69.- Informe de inspección.- La Superintendencia notificará a la cooperativa con el informe de inspección y concederá un término mínimo de quince días, para justificar

observaciones, en caso de haberlas. Concluido dicho término y luego del análisis de las justificaciones presentadas, podrá disponer el archivo del expediente o la elaboración de un plan de regularización, para su inmediata aplicación.

El plan de regularización detallará las acciones a ejecutarse para solucionar o superar los asuntos que hayan sido observados, las obligaciones asumidas por los directivos y socios, un cronograma de su ejecución y los resultados esperados en cada una de sus fases o etapas de cumplimiento.

Art. 70.- Prohibiciones.- Las cooperativas, mientras dure la regularización, no podrán distribuir excedentes, aumentar las dietas o remuneraciones, ni adquirir bienes muebles o inmuebles, a menos que sean indispensables para el cumplimiento del plan de regularización.

Art. 71.- Cumplimiento del plan.- La Superintendencia, verificará el cumplimiento del plan de regularización y, de haberse cumplido, dará por concluido el proceso de regularización, caso contrario, declarará la intervención de la cooperativa.

Art. 72.- Procedimiento especial.- La Junta de Regulación, para el caso de cooperativas de ahorro y crédito establecerá, en forma específica, las causas y el procedimiento de regularización.

Art. 73.- Causas para la intervención.- La Superintendencia, mediante resolución dispondrá la intervención de una cooperativa por las causas previstas en el artículo 68 de la ley y por las siguientes:

1. Si requerida la entrega de balances, no lo hiciere y hayan motivos para presumir una situación de grave riesgo para sus socios o terceros;
2. Si incumpliere con promociones u ofertas de sorteos;
3. Si emitiera obligaciones u otros compromisos de pago por captaciones, sin autorización de la Superintendencia; y,
4. Si no diere cumplimiento a las disposiciones impartidas para el control del lavado de activos.

Art. 74.- Denuncia.- Para efectos de aplicación de la letra e) del artículo 68 de la ley, el Superintendente podrá disponer la intervención de una cooperativa, en base a denuncia con determinación precisa de las violaciones a la ley o las irregularidades denunciadas, así como de los perjuicios que se hayan causado o pudieran causarse.

Si la denuncia fuere manifiestamente infundada, se la considerará incurso en lo tipificado en el artículo 170, letra g) de la ley y, el Superintendente, al rechazarla, impondrá, al o los denunciante(s), la multa prevista en la letra a) del artículo 172 de la ley, multa que ingresará al patrimonio de la Superintendencia.

Art. 75.- Resolución de intervención.- La Superintendencia, en la resolución de intervención de una cooperativa, removerá a los vocales de los consejos y al Gerente y designará un interventor, fijando la caución que deberá rendir al posesionarse del cargo.

Art. 76.- Posesión del interventor.- El Interventor designado, dentro de los cinco días posteriores a su designación, entregará la caución fijada y se posesionará ante el Superintendente, de inmediato se procederá a la entrega-recepción de los bienes y documentos de la cooperativa, por parte del gerente y, en caso de negativa expresa o presunta, se la requerirá mediante apremio personal.

Art. 77.- Convocatoria asamblea general.- El interventor, en el plazo de treinta días de posesionado, convocará a una asamblea general para normalizar el funcionamiento de la cooperativa, la misma que, en caso necesario, autorizará la contratación de una auditoría externa, la adquisición o venta de activos fijos y la contratación de personal.

Art. 78.- Informes mensuales y elecciones.- El interventor informará a la Superintendencia, mensualmente, sobre los avances y resultados de su intervención y al finalizarla, convocará a asamblea general para que conozca y apruebe su informe de labores, los estados financieros y elija nuevos directivos. En estas elecciones no podrán participar los directivos que estuvieron en funciones al momento de resolverse la intervención.

Art. 79.- Terminación de la intervención.- La Superintendencia, recibirá copia del informe y acta de la asamblea de elecciones y expedirá la resolución dando por concluida la intervención y disponiendo el registro de los directivos y representante legal.

Sección VI

Disposiciones especiales

Parágrafo I

Cooperativas de vivienda

Art. 80.- Aportaciones para terreno, obras y construcción.- Las cooperativas de vivienda no podrán admitir un número de socios mayor al de la capacidad del terreno, viviendas u oficinas previstas.

Art. 81.- Prohibición de pertenecer a más de una cooperativa.- Ninguna persona podrá pertenecer a más de una cooperativa de vivienda, ni por sí misma, ni por su cónyuge, excepto, quienes siendo socios de una cooperativa de vivienda habitacional, lo sean en una cuyo objeto sea la construcción o adquisición de oficinas.

Art. 82.- Obligación de entregar escrituras.- Las cooperativas del grupo vivienda, entregarán a sus socios, las escrituras de adjudicación, máximo, dentro del año siguiente de la emisión de la ordenanza municipal o documento expedido por la autoridad correspondiente que faculte dicha adjudicación.

Parágrafo II

Cooperativas de transporte

Art. 83.- Definición y clases.- Son las constituidas para prestar el servicio de transporte de personas o bienes, por vía aérea, terrestre, fluvial o marítima y podrán ser de propietarios o de trabajadores.

Art. 84.- Cooperativas de propietarios.- Son aquellas en las que sus socios, choferes profesionales, mantienen la propiedad de los vehículos destinados al servicio. Las cooperativas de propietarios podrán ser de caja común o de caja individual.

Art. 85.- Cooperativas de caja común.- Son aquellas en las que, la recaudación por concepto de la prestación del servicio, integra un fondo común repartible entre los socios, una vez deducidos los gastos generales y de conformidad con el mecanismo de devolución aprobado por la asamblea general.

En estas cooperativas ningún socio podrá tener más de un voto, ni más de dos unidades, ni por sí mismo, ni por interpuesta persona y deberá conducir personalmente uno de ellos.

Art. 86.- Cooperativas de caja individual.- Son aquellas en las que sus socios, choferes profesionales, son propietarios individuales, de no más de un vehículo en la cooperativa y que los administran y conducen personalmente, salvo quienes no puedan hacerlo, por exceso de la jornada de trabajo diario, por razones de edad, incapacidad física o mental sobreviniente, enfermedad, impedimento legal o calamidad doméstica debidamente justificada, quienes podrán contratar choferes asalariados, previamente calificados por el Consejo de Administración y sujetos al Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social.

Art. 87.- Cooperativas de trabajadores.- Son aquellas en las cuales la totalidad de vehículos y bienes muebles e inmuebles, son propiedad de la cooperativa y sus socios son todas las personas que trabajan en la organización, en cualquiera de sus áreas administrativas u operacionales. Estas cooperativas se regirán por las normas generales para las de trabajo asociado constantes en el presente reglamento.

Art. 88.- Prohibición para ser socios.- No podrán ingresar como socios de una cooperativa de transporte de ningún tipo, los servidores públicos, los miembros activos de la Policía Nacional, Policía Metropolitana, Fuerzas Armadas, ni servidores y agentes de los órganos de control y regulación de transporte y tránsito.

Art. 89.- Permisos de operación.- Los permisos de operación, contratos, concesiones o autorizaciones para la prestación del servicio de transporte, se concederán a favor de las cooperativas y no individualmente a sus socios. Se prohíbe la transferencia de los derechos sobre permisos de operación o contratos de explotación de rutas, frecuencias, cupos, o similares, a cualquier título y bajo cualquier figura jurídica.

TITULO III

Del Sector Financiero Popular y Solidario

Capítulo I

De las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro

Art. 90.- Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales.- Son organizaciones que pertenecen al Sector Financiero Popular y Solidario, que realizan sus actividades, exclusivamente, en los recintos, comunidades, barrios o localidades en donde se constituyen y se pueden financiar, con sus propios recursos o con fondos provenientes de programas o proyectos ligados al desarrollo de sus integrantes. Ejercerán su actividad exclusivamente en un área de influencia que no afecte a otras entidades financieras con estos fines o propósitos.

Art. 91.- Cajas de ahorro.- Son las organizaciones integradas por miembros de un mismo gremio o institución; por grupos de trabajadores con un empleador común, grupos familiares, barriales; o, por socios de cooperativas distintas a las de ahorro y crédito.

Art. 92.- Constitución, organización y funcionamiento.- La constitución y organización de las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, se regirá por lo dispuesto para las organizaciones comunitarias. El funcionamiento y actividades de estas organizaciones serán determinados por la Junta de Regulación.

Capítulo II

De las cooperativas de ahorro y crédito

Sección I

De la organización interna

Art. 93.- Ingreso de socios.- Los consejos de administración de las cooperativas ubicadas en los segmentos dos, tres y cuatro, podrán delegar la facultad de aceptar socios a la gerencia o administradores de las oficinas operativas.

Art. 94.- Requisitos para ser designado vocal de los consejos.- Además de los requisitos contemplados en el estatuto social, en las cooperativas de los segmentos tres y cuatro, al menos dos de los vocales principales de los consejos y sus respectivos suplentes, deberán tener título profesional de tercer nivel, según las definiciones de la ley que regule la educación superior, en profesiones relacionadas con administración de empresas, economía, finanzas, contabilidad, auditoría o jurisprudencia, debiendo las cooperativas, establecer en el reglamento de elecciones, mecanismos que aseguren la participación de socios con el perfil requerido.

La Superintendencia registrará a los vocales de los consejos de las cooperativas de todos los segmentos; y, además, calificará a los vocales en los segmentos tres y cuatro.

Art. 95.- Requisitos para gerentes.- Para ser designado Gerente de una cooperativa del segmento uno, el postulante deberá cumplir los requisitos señalados en el estatuto social. Para el segmento dos el postulante, deberá acreditar conocimientos y experiencia de, al menos, dos años en economía social y solidaria y finanzas solidarias.

Para ser designado Gerente de una cooperativa de los segmentos tres y cuatro, el postulante, deberá acreditar título profesional de, al menos, tercer nivel en administración, economía, finanzas, o ciencias afines, de conformidad con la ley que regule la educación superior o experiencia mínima de cuatro años como administrador, responsable de áreas de negocios, financieros o de administración de riesgos, en cooperativas de ahorro y crédito u otras instituciones de la economía social y solidaria y finanzas solidarias.

Sección II

De la segmentación

Art. 96.- Segmentación.- La Junta de Regulación, únicamente, a propuesta de la Superintendencia, elaborará y modificará la segmentación de las cooperativas de ahorro y crédito en base a los criterios previstos en el artículo 101 de la ley.

El Comité Interinstitucional, la Junta de Regulación y la Superintendencia, cuando emitan políticas, regulaciones o disposiciones para las cooperativas de ahorro y crédito, lo harán considerando los segmentos y cuando no se mencione la segmentación, se entenderá que las disposiciones son para todas las cooperativas, sin perjuicio del segmento al que pertenezcan.

La Superintendencia determinará cuando una cooperativa ha superado el segmento en que se encuentre ubicada, disponiendo el cambio al que corresponda.

Sección III

De las operaciones

Art. 97.- Exclusividad.- Unicamente las organizaciones que integran el Sector Financiero Popular y Solidario, reconocidas por la ley y debidamente autorizadas por la Superintendencia, podrán efectuar las operaciones financieras previstas en el artículo 83 de la ley.

Las operaciones señaladas en el presente artículo, podrán efectuarse por medios electrónicos, ópticos, magnéticos, inalámbricos, electromagnéticos u otros similares o de cualquier otra tecnología, así como de sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, que se implementarán bajo óptimas medidas de seguridad y de conformidad con las regulaciones que se dicten para el efecto.

Art. 98.- Autorización previa.- Para efectos de aplicación de la letra a) del artículo 83 de la ley, las cooperativas que desearan captar depósitos a la vista, en una modalidad distinta a la de ahorros, requerirán autorización de la Superintendencia, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos mediante regulación.

Art. 99.- Inversiones.- Las cooperativas de ahorro y crédito podrán realizar inversiones en las entidades de integración cooperativa hasta por el 10% de su patrimonio técnico y en servicios no financieros legalmente autorizados, hasta por el 10% de su patrimonio técnico.

Art. 100.- Operaciones con terceros.- Para efectos de aplicación de la ley, no se consideran operaciones con terceros, las relacionadas con cobranzas y pagos de servicios públicos, impuestos, remuneraciones, pensiones de jubilación, bono de desarrollo humano, servicios privados y otros de similar índole, efectuadas en las cooperativas de ahorro y crédito previa autorización de la Superintendencia.

Capítulo III

Cajas Centrales

Art. 101.- Definición.- Las cajas centrales son instituciones cooperativas que integran el sector financiero popular y solidario y que tienen por objeto realizar operaciones financieras de segundo piso, debidamente autorizadas por la Superintendencia, exclusivamente, con las cooperativas de ahorro y crédito.

En su organización y funcionamiento, aplicarán las normas, regulaciones y criterios determinados para las cooperativas de ahorro y crédito pertenecientes al segmento cuatro, además de las específicas que, para dichas cajas, sean dictadas por la Junta de Regulación.

Art. 102.- Vocales de los consejos de las cajas centrales.- En las cajas centrales, el Consejo de Administración estará integrado por cinco vocales principales y sus respectivos suplentes y el Consejo de Vigilancia por tres vocales principales y sus respectivos suplentes, designados de entre los gerentes o presidentes de las cooperativas afiliadas, salvo que, simultáneamente, tengan la calidad de directivos o representantes legales de otros organismos de integración representativa o económica.

De los vocales del Consejo de Administración, al menos tres vocales principales y sus respectivos suplentes y del Consejo de Vigilancia, al menos dos vocales principales y sus

respectivos suplentes deberán cumplir con el perfil profesional establecido para las cooperativas del segmento cuatro.

Las cajas centrales, en resguardo del derecho de las minorías, previsto en la ley, establecerán en su normativa interna, la obligación que en los consejos, se garantice la participación de al menos un vocal principal y su respectivo suplente, elegidos de las cooperativas pertenecientes a los segmentos uno y dos.

Los vocales de los consejos de las cajas centrales, podrán ejercer dichas funciones mientras mantengan la calidad de Gerente o Presidente del Consejo de Administración en la cooperativa a la que representan.

Art. 103.- Operaciones.- Las cajas centrales, además, de las operaciones previstas en el artículo 103 de la ley, previa autorización de la Superintendencia podrán efectuar las siguientes:

1. Administración de portafolio de inversiones;
2. Estructuración de productos de gestión de riesgo financiero; y,
3. Estructuración de titularización de activos.

Art. 104.- Aportes obligatorios.- Las cooperativas socias de las cajas centrales, deberán mantener en todo tiempo un monto de certificados de aportación, mínimo por un valor equivalente al uno por ciento de su patrimonio técnico calculado al treinta y uno de diciembre del ejercicio económico inmediato anterior.

Art. 105.- Exoneración de aportes de las cajas centrales.- Las cajas centrales, no están obligadas a aportar para el fondo de liquidez, ni el seguro de depósitos, así como tampoco le son aplicables, los cupos de crédito establecidos en el artículo 86 de la ley.

Art. 106.- Redención de certificados de aportación.- En caso de pérdida de la calidad de socia, por cualquier causa, el valor correspondiente a los certificados de aportación y la liquidación de haberes se efectuará dentro de los treinta días posteriores a la aprobación de los balances anuales por parte de la asamblea general y siempre dentro del límite de redención del 5% previsto en la ley.

Capítulo IV

Del Fondo de Liquidez y del Seguro de Depósitos

Art. 107.- Funciones del directorio.- Son funciones del Directorio, además de las señaladas en la ley, las siguientes:

1. Aprobar las operaciones de crédito de liquidez contingente del fondo;
2. Fijar las tasas de interés de los créditos otorgados por el fondo;
3. Informar a la Superintendencia los casos de iliquidez de las organizaciones aportantes al Fondo de Liquidez;
4. Determinar los requisitos y cronograma para la incorporación progresiva de las entidades financieras populares y solidarias al Fondo de Liquidez, al Seguro de Depósitos y al Sistema Nacional de Pagos; y,
5. Aprobar los presupuestos del Fondo de Liquidez y del Seguro de Depósitos.

Art. 108.- Representación legal.- El Fondo de Liquidez y el Seguro de Depósitos estarán representados legalmente por el Gerente del Banco Central y el Gerente General la Corporación del Seguro de Depósitos, respectivamente, quienes ejercerán la jurisdicción coactiva de conformidad con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Art. 109.- Destino de los recursos.- Los recursos del Fondo de Liquidez y del Seguro de Depósitos, no podrán ser destinados para cubrir gastos administrativos, ni para pago de inversiones en activos fijos de las secretarías técnicas.

Sección II

Del Fondo de liquidez

Art. 110.- Operaciones del Fondo de Liquidez.- El Fondo de Liquidez, efectuará las operaciones a las que se refiere el artículo 109 de la ley, en calidad de prestamista de última instancia. Los créditos concedidos para cubrir deficiencias de cámaras de compensación se referirán exclusivamente a las del Sistema Nacional de Pagos, administradas por el Banco Central del Ecuador.

Sección III

Del Seguro de Depósitos

Art. 111.- Depósitos asegurados.- El seguro de depósitos cubrirá los depósitos a la vista o a plazo fijo, realizados en las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario, siempre que, se encuentren debidamente contabilizados como pasivos en dichas entidades y dentro de las condiciones determinadas en el presente reglamento y en las disposiciones emitidas por el Directorio Unico.

Art. 112.- Exclusiones.- Están excluidos de la cobertura del seguro de depósitos los siguientes:

1. Los aportes al fondo social o capital, efectuados por los integrantes de las organizaciones aseguradas;
2. Las obligaciones emitidas por las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario;
3. Los depósitos que cuenten con garantía específica;
4. Los depósitos gravados con garantía de crédito a favor del depositante o de terceros, incluidos los encajes sobre préstamos; y,
5. Los depósitos efectuados por los miembros de los órganos de dirección y control y por los gerentes de la organización.

Art. 113.- Objeción de pago.- La COSEDE negará o postergará el pago de la cobertura del seguro, cuando los depósitos no reúnan los requisitos formales o sustanciales establecidos por la Superintendencia o, cuando, a criterio de esta última o del liquidador, existan indicios que hagan presumir que se trata de depósitos irregulares o sujetos a verificación o que constituyan negocios simulados, indirectos, fraudulentos o ilegales, no obstante lo cual, la Corporación provisionará el valor correspondiente al pago del seguro de estos depósitos, hasta que la autoridad competente disponga lo que fuere pertinente. Los depósitos asegurados, no reclamados durante el plazo de diez años, contados a partir de la fecha de resolución de liquidación forzosa de la institución financiera dispuesta por la Superintendencia, serán restituidos al fideicomiso del "Fondo Seguro de Depósitos del Sector Financiero Popular y Solidario.

Art. 114.- Liquidación forzosa.- La Superintendencia dispondrá la aplicación de los procedimientos de resolución previstos en el artículo 118 de la ley y de persistir la inviabilidad de la cooperativa, declarará la liquidación forzosa de la organización, notificando al Directorio Unico, quien ordenará el pago del seguro bajo los límites y

procedimientos establecidos, pago que se ejecutará dentro de los diez días siguientes a la notificación.

Título IV

De los Organismos de Integración y Entidades de Apoyo

Capítulo I

Integración Representativa

Art. 115.- Integración representativa.- La integración representativa de las organizaciones sujetas a la ley, se efectuará entre unidades económicas populares, organizaciones comunitarias, asociaciones EPS y cooperativas que tengan idéntico objeto social, de conformidad con la siguiente estructura:

1. Uniones y redes, constituidas por unidades económicas populares, organizaciones comunitarias, asociaciones EPS o cooperativas;
2. Federaciones nacionales, constituidas por cooperativas; asociaciones EPS, uniones y redes; y,
3. Confederaciones nacionales, constituidas por federaciones nacionales.

La afiliación a los organismos de integración por parte de las personas y organizaciones amparadas por la ley, será voluntaria.

Art. 116.- Uniones y redes.- Las uniones, son organismos de integración representativa de unidades económicas populares, organizaciones comunitarias, cajas de ahorro, bancos comunales, asociaciones EPS o cooperativas con idéntico objeto social, a nivel cantonal, provincial o regional, que canalizan, en su ámbito geográfico, los servicios de las federaciones y representan a sus afiliadas, ante ellas y se constituirán con, al menos, el veinte y cinco por ciento de unidades económicas populares, organizaciones comunitarias, asociaciones EPS o cooperativas del cantón, provincia o región de su domicilio que se encuentren inscritas en el Registro Público.

Las redes, se constituirán con un número mínimo de veinte organizaciones de, por lo menos, tres formas de organización diferentes y podrán incluir a entidades de apoyo, no obstante lo cual estas últimas no podrán tener más del 20% por ciento de participación en los órganos directivos y de control internos.

Las uniones y redes, podrán efectuar las siguientes actividades:

1. Asumir, la representación institucional de sus entidades afiliadas;
2. Gestionar apoyo técnico o financiero para el fortalecimiento de la unión y de sus afiliadas;
3. Prestar servicios de provisión y abastecimiento de materia prima, herramientas, insumos, repuestos, educación y capacitación, exclusivamente a sus afiliadas;
4. Recibir información financiera administrativa y social en forma periódica de sus afiliadas, consolidarla y hacerla pública;
5. Defender los intereses institucionales de sus afiliadas y contribuir a resolver sus conflictos;
6. Actuar como amigables componedores para la solución de los conflictos al interior de las formas de organización que agrupan;
7. Colaborar con la Superintendencia en actividades de interés del sector al que representen; y,
8. Las demás que establezca el presente reglamento y el estatuto social.

Art. 117.- Federaciones.- Las federaciones son los organismos de representación a nivel nacional e internacional, de las unidades económicas populares, organizaciones comunitarias, asociaciones EPS y cooperativas.

Se constituirán con un mínimo de cincuenta cooperativas de, al menos, trece provincias diferentes o diez uniones provinciales de la misma clase, con excepción de las asociaciones EPS y cooperativas, cuya actividad principal sea la producción o explotación de bienes existentes únicamente en determinadas regiones del país, tales como pesqueras o mineras, las que podrán formar su federación con cinco uniones provinciales o cincuenta cooperativas de cinco provincias diferentes.

En la constitución de las federaciones, además de las uniones provinciales podrán participar uniones cantonales.

No se podrá constituir, a nivel nacional, más de una federación de una misma clase. En el caso de cooperativas de transporte el término clase se asimila al término modalidad señalado en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Las federaciones podrán efectuar las siguientes actividades:

1. Representar y defender los intereses de las entidades afiliadas;
2. Propender a la solución de los conflictos que surjan en las entidades que la conforman;
3. Ofrecer asesoramiento, asistencia técnica y capacitación a sus miembros;
4. Prestar servicios de provisión y abastecimiento de materia prima, herramientas, insumos, repuestos, educación y capacitación, exclusivamente a sus afiliadas;
5. Asesorar a sus afiliadas en el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría;
6. Constituir unidades de auditoría externa para sus afiliadas, cumpliendo las condiciones establecidas por el ente regulador;
7. Fomentar y desarrollar programas de educación en economía social y solidaria y en cooperativismo, a nivel nacional;
8. Velar por la aplicación correcta de las disposiciones legales y estatutarias de sus afiliadas;
9. Establecer relaciones con organismos relacionados con la economía social y solidaria, nacionales e internacionales;
10. Promover la constitución de asociaciones, cooperativas y uniones de su respectiva clase;
11. Crear centros de mediación para la solución de conflictos en las cooperativas de su clase o suscribir convenios, para este fin, con centros legalmente autorizados;
12. Centralizar la información sobre patrimonio, activos, socios y operaciones de sus afiliadas y difundirla, con fines estadísticos;
13. Representar a las organizaciones comunitarias, asociaciones y cooperativas de su clase, ante las autoridades gubernamentales y organismos internacionales;
14. Colaborar con la Superintendencia, en actividades de interés del movimiento cooperativo, asociativo y comunitario;
15. Canalizar recursos financieros provenientes de instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras en beneficio de sus filiales; y,
16. Las demás que establezca la ley, este reglamento y su estatuto social.

Art. 118.- Confederaciones.- Las confederaciones son los máximos organismos de integración representativa de las unidades económicas populares, organizaciones comunitarias, asociativas y de las cooperativas. Se constituirán con las federaciones nacionales de cada una de las formas de organización, para cumplir los siguientes objetivos:

1. Representar a las entidades de base que agrupan, ante organismos nacionales e internacionales; y,

2. Organizar los congresos de las unidades económicas populares, sector comunitario, asociativo o cooperativista, según corresponda a la confederación.

Art. 119.- Capital social inicial.- Los organismos de integración representativa, se constituirán con un monto mínimo equivalente a veinte salarios básicos unificados.

Art. 120.- Estructura y organización interna.- Las uniones, redes, federaciones y confederaciones, se registrarán por las mismas normas de las cooperativas en cuanto les fuere aplicable, tendrán su misma estructura interna y podrán establecer las oficinas que sean necesarias para la eficiente prestación de los servicios que proporcionen.

Art. 121.- Asambleas y congresos.- Las federaciones y confederaciones efectuarán sus asambleas, anualmente, en la sede designada, con el objeto de conocer los informes económicos y administrativos y aprobar sus planes de desarrollo.

Las confederaciones nacionales, en conjunto, organizarán, por lo menos, cada dos años, el congreso nacional de su respectivo grupo, con el objeto de unificar y robustecer la Economía Popular y Solidaria, estudiar sus problemas y buscar las soluciones más convenientes para ellos.

Art. 122.- Pérdida de representación.- Los miembros de los órganos directivos y de control de las entidades de integración representativa, mantendrán esa calidad, mientras sean directivos de la afiliada, en cuya representación fueron elegidos.

En caso de término de periodo en la organización afiliada a que pertenecen, se requerirá ratificación escrita de la nueva directiva de dicha entidad, caso contrario asumirá la vocalía el vocal suplente del organismo de integración, que corresponda.

Art. 123.- Auditorías obligatorias.- Los organismos de integración representativa que tengan más de doscientos mil dólares en activos, contarán obligatoriamente con auditoría interna y con auditoría externa anual. En los organismos de integración con activos inferiores a doscientos mil dólares, las funciones de auditoría interna, serán ejercidas por el Consejo de Vigilancia.

Capítulo II

Integración Económica

Art. 124.- Integración económica.- Los organismos de integración económica, bajo cualquier denominación que adopten, se constituirán, en forma temporal o permanente, por dos o más organizaciones comunitarias, asociaciones EPS o cooperativas, de la misma o distinta clase.

Art. 125.- Constitución, organización y funcionamiento.- Los organismos de integración económica, se constituirán con el convenio correspondiente, suscrito por los representantes legales de las organizaciones integrantes, en la que se harán constar, los objetivos, mecanismos de funcionamiento, acceso a los servicios y financiamiento de los mismos, así como la administración y representación legal de la forma de organización constituida.

Capítulo III

Entidades de Apoyo

Art. 126.- Entidades de apoyo.- Las fundaciones, corporaciones, uniones, asociaciones o federaciones, constituidas al amparo del Código Civil, que desarrollen programas de educación, capacitación y asistencia en favor de las unidades económicas populares, organizaciones comunitarias, asociativas y cooperativistas, serán consideradas como entidades de apoyo, por tanto no accederán a los beneficios contemplados en la ley, para las organizaciones de la economía popular y solidaria.

Los programas a que se refiere el presente artículo se someterán a la aprobación del instituto, el mismo que, cuidará que se enmarquen en el Plan Nacional de Capacitación.

Las entidades de apoyo informarán, anualmente, al instituto, sobre el cumplimiento de sus programas.

Art. 127.- Prohibición a entidades de apoyo.- Las fundaciones y corporaciones civiles, están prohibidas de efectuar operaciones de intermediación financiera con los beneficiarios de sus créditos, bajo figuras como ahorros, depósitos a plazo fijo, encajes, entre otras. Para efectuar dichas operaciones, deberán, obligatoriamente, constituirse como cooperativa de ahorro y crédito u otra entidad financiera, de conformidad con la ley correspondiente.

La prohibición del presente artículo no incluye los créditos concedidos por las organizaciones de la Economía Popular y Solidario ni las donaciones efectuadas a su favor.

Las fundaciones y corporaciones controladas por la Superintendencia, en sus operaciones de crédito, deberán sujetarse a las tasas de interés fijadas por el Banco Central del Ecuador y deberán cumplir con las normas de prevención de lavado de activos que determine la ley.

Deberán contratar auditoría externa anual y auditoría interna, conforme lo disponga la Junta de Regulación.

Título V

Del Fomento, Promoción e Incentivos

Capítulo I

De los beneficios

Art. 128.- Medidas de acción afirmativa.- Los ministerios, secretarías de Estado, instituciones financieras públicas, institutos públicos de investigación, capacitación, fomento y promoción y las demás entidades que conforman la Administración Central así como las universidades, los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de sus competencias, diseñarán e implementarán, en favor de las personas y organizaciones parte de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, medidas de acción afirmativa, tales como, márgenes de preferencia, flexibilización de requisitos y entrega de garantías, simplificación de trámites, mejores condiciones de pago y otros que permitan el acceso en condiciones favorables a:

1. Líneas de crédito otorgadas por las instituciones financieras públicas;
2. Fondos concursables;
3. Financiamiento y cofinanciamiento de proyectos productivos y de capacitación;
4. Seguro agrícola, ganadero, pesquero artesanal y acuícola, subsidiado por el Estado;
5. Sistemas simplificados de tributación establecidos por ley o por el ente estatal competente; y,
6. Planes, programas y proyectos habitacionales y de infraestructura productiva.

Art. 129.- Factores que deben considerar las medidas de acción afirmativa.- Las medidas de acción afirmativa que adopten las entidades de la Función Ejecutiva y los gobiernos autónomos descentralizados, al amparo de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y este reglamento deberán observar en su formulación, direccionamiento e implementación factores étnicos, socioeconómicos, y de pertenencia a grupos de atención prioritaria.

Art. 130.- Compras públicas.- El Instituto Nacional de Contratación Pública, sobre la base del estudio y análisis que realice el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, establecerá periódicamente las obras, bienes y servicios, normalizados o no, provenientes de las personas y organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, que serán adquiridos mediante feria inclusiva y otros procedimientos de contratación pública constantes en la normativa pertinente.

Art. 131.- Apoyo financiero.- El Banco Nacional de Fomento y la Corporación Financiera Nacional, anualmente, presupuestarán los recursos financieros que en calidad de préstamos, serán canalizados, en condiciones preferenciales y prioritariamente a los organismos de integración amparados por la ley, previa presentación de los correspondientes proyectos cumpliendo los requerimientos de la entidad financiera.

Art. 132.- Cofinanciamiento.- El Instituto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Ministerio de Industrias y Productividad y otras entidades del Ejecutivo que, en el marco de sus competencias, concedan apoyo financiero con fines productivos, incorporarán anualmente en sus presupuestos, recursos destinados para el cofinanciamiento de proyectos productivos y desarrollo e implementación del subsidio al seguro agrícola, ganadero, pesquero y acuícola de las organizaciones de la economía solidaria, en el ámbito de las políticas dictadas por el Comité Interinstitucional y enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo. El cofinanciamiento efectuado por entidades del sector público se lo ejecutará cumpliendo con lo dispuesto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y se lo canalizará a través de organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario.

Art. 133.- Criterios.- Las entidades del sector público que concedan financiamiento y cofinanciamiento, a las organizaciones amparadas por la ley, priorizarán en su otorgamiento los programas y proyectos que promuevan la inclusión social y se articulen con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, en lo que corresponda a la economía popular y solidaria, de conformidad con las normas dictadas por cada entidad en las que se privilegiará la generación de empleo, la participación de migrantes, la participación de mujeres jefes de familia; incorporación de valor agregado en los bienes y servicios objeto del proyecto, entre otros.

Art. 134.- Programas de capacitación.- La Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional, en coordinación con el Instituto, en su Plan Anual de Capacitación y Formación Profesional para Grupos de Atención Prioritaria y Actores de la Economía Popular y Solidaria, incluirá programas de capacitación especializados en procesos económicos, organizativos, acreditación, registros, promoción e inteligencia de mercados

y trámites de importación y exportación, entre otros temas, en el marco de las políticas dictadas por el Comité Interinstitucional.

Art. 135.- Medios de pago complementarios.- La utilización de medios de pago complementarios, se efectuará, exclusivamente al interior de las organizaciones no pertenecientes al Sector Financiero Popular y Solidario.

Los medios de pago complementarios, no tienen poder liberatorio, por consiguiente, no podrán generar rendimiento financiero, ni ser utilizados para operaciones de crédito, garantías, ni ser sujetos de depósitos en entidades financieras, ya que no constituyen moneda de curso legal, pues ésta, se encuentra restringida al ámbito geográfico del domicilio de la organización comunitaria.

Capítulo II

Acceso, suspensión y revocatoria de beneficios

Art. 136.- Certificación de cumplimiento de obligaciones.- Las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, para acceder a los beneficios que les otorgue la legislación nacional, acreditarán su inscripción en el Registro Público correspondiente y adjuntarán una certificación de encontrarse activas y en cumplimiento de sus obligaciones, obtenida en la Superintendencia.

El certificado de cumplimiento de obligaciones tendrá validez por un año.

Art. 137.- Revocatoria o suspensión de beneficios.- La Superintendencia, podrá, de oficio o por denuncia, previo ejercicio del derecho a la defensa, suspender los beneficios contemplados en la ley, cuando la organización comunitaria, asociación EPS o cooperativa, se encuentre haciendo uso indebido de dichos beneficios, notificando del particular, tanto a la organización, como a las autoridades que corresponda.

Se entiende por uso indebido, la falta de derecho para recibir el beneficio o exención, la presentación de información falsa, el traslado del beneficio a terceros, la práctica de conductas discriminatorias, el aprovechamiento personal por parte de directivos o representantes legales utilizando a la organización para ello, entre otras conductas.

Título VI

De las Relaciones con el Estado

Capítulo I

De la Rectoría

Sección I

Del Comité Interinstitucional de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario

Art. 138.- Integración y atribuciones.- El Comité Interinstitucional, estará integrado por los Ministerios de Coordinación de: Desarrollo Social que lo presidirá; de la Producción; y, de Política Económica.

Son atribuciones del Comité Interinstitucional, las siguientes:

1. Dictar y coordinar las políticas de fomento, promoción, incentivos, funcionamiento y control de las actividades de las personas y organizaciones sujetas a la ley;
2. Evaluar el cumplimiento de las políticas públicas;
3. Conocer y aprobar los informes de labores anuales de los entes de regulación;
4. Conocer la memoria anual del Superintendente;

5. Solicitar informes en cualquier momento a los organismos de regulación y de control; y,
6. Dictar política para la elaboración del Plan Nacional de Capacitación en Economía Popular y Solidaria;

El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, será el encargado de elaborar, coordinar y concertar propuestas de políticas públicas para la Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario; como también de evaluar su cumplimiento e informar al comité para su aprobación, para cuyo efecto, adecuará su estructura organizacional.

Art. 139.- Políticas.- Las políticas dictadas por el Comité Interinstitucional, para su implementación, serán puestas en conocimiento de los entes de regulación, de la Superintendencia, del instituto, de la corporación y demás instituciones del sector público, vinculadas con la Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario, según el caso.

Art. 140.- Apoyo al Comité Interinstitucional.- El Comité Interinstitucional, para el ejercicio de sus atribuciones, contará con la información y opinión que le proporcione el Consejo Consultivo y con el apoyo del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria.

Art. 141.- Responsabilidades.- El instituto en el ejercicio de sus funciones de apoyo al Comité Interinstitucional, tendrá las siguientes responsabilidades:

1. Generar información para la formulación de políticas públicas por parte del comité; y,
2. Otros requerimientos formulador por el comité.

Sección II

Del Consejo Consultivo

Art. 142.- Integración.- El Consejo Consultivo estará integrado por nueve miembros, elegidos en la siguiente forma:

1. Uno, en representación de la Asociación de Municipalidades del Ecuador;
 2. Uno, en representación del Consorcio de Gobiernos Provinciales;
 3. Uno, en representación del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador;
- y,
4. Seis, en representación de las organizaciones amparadas por la presente ley, elegidos de la siguiente forma: uno, en representación de las federaciones de las unidades económicas populares, tres en representación de las federaciones de los sectores comunitario, asociativo y cooperativista; y, dos en representación del Sector Financiero Popular y Solidario.

El Consejo Nacional Electoral, tendrá a su cargo la organización y ejecución del proceso eleccionario, de los representantes a los que se refiere el número 4 del presente artículo, en aplicación de lo previsto en el artículo 25 del Código de la Democracia.

Art. 143.- Funciones.- El Consejo Consultivo tendrá las siguientes funciones:

1. Brindar información sobre la situación del sector relacionado con la política a dictarse;
2. Emitir su opinión sobre los asuntos que le fueren requeridos por el Comité Interinstitucional; y,
3. Proponer recomendaciones sobre políticas y regulaciones orientadas a los sectores que representa;

La información, opiniones y propuestas que formule el Consejo Consultivo, no tienen el carácter de vinculantes para el Comité Interinstitucional.

Art. 144.- Funcionamiento.- El Consejo Consultivo, cumplirá con las funciones establecidas en este reglamento, a pedido del Comité Interinstitucional, por su propia iniciativa o, a petición de las organizaciones a las que representa. La organización y funcionamiento del Consejo Consultivo serán determinadas por sus integrantes y los gastos que demande el cumplimiento de sus funciones serán de cuenta de las organizaciones a las que representan dichos integrantes.

Capítulo II

De la Regulación

Sección I

Normas comunes

Art. 145.- Regulación.- La regulación es la capacidad de emitir la normativa necesaria para el adecuado cumplimiento de las políticas públicas expedidas por el Comité Interinstitucional con el fin de dirigir, orientar o modificar la conducta de las personas y organizaciones sujetas a la ley. La regulación se ejerce en el marco de las competencias determinadas en la ley y este reglamento.

Art. 146.- Actos normativos.- Las regulaciones constituyen actos normativos, que se expedirán a través de resoluciones publicadas en el Registro Oficial.

Art. 147.- Información.- Para el cabal ejercicio de sus atribuciones, los entes de regulación podrán solicitar información, tanto a las instituciones del Estado, como a las organizaciones a ser reguladas.

Art. 148.- Entes reguladores.- La regulación de las formas de organización de la Economía Popular y Solidaria, corresponde al Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social y la del Sector Financiero Popular y Solidario, a la Junta de Regulación. Las regulaciones se dictarán en forma diferenciada según la naturaleza y segmentos en el que se ubiquen las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria y las del sector Financiero Popular y Solidario, respectivamente.

Art. 149.- Funciones.- La Secretaria Técnica a que se refiere el artículo 144 de la ley, tendrá las siguientes funciones:

1. Proponer regulaciones para la Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario;
2. Realizar seguimiento y evaluación del cumplimiento de las regulaciones;
3. Generar información para la formulación de políticas públicas por parte del comité;
4. Impulsar y coordinar la realización de investigaciones o estudios sobre diversos aspectos de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario;
5. Brindar apoyo técnico y administrativo a los entes reguladores; y,
6. Las demás que le sean asignadas por los entes reguladores.

Sección II

De la Regulación de la Economía Popular y Solidaria

Art. 150.- Atribuciones.- El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, regulará lo siguiente:

1. La instrumentación de las políticas dictadas por el Comité Interinstitucional, en lo relacionado con las organizaciones de la economía popular y solidaria;
2. La determinación de los niveles en que se ubicarán las organizaciones de la economía popular y solidaria para efectos de las regulaciones diferenciadas;
3. Los asuntos dispuestos expresamente en la ley y este reglamento;
4. Los procedimientos para la constitución, funcionamiento y control de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, en los aspectos no previstos en la ley y este reglamento; y,
5. La utilización de medios de pago complementarios, de conformidad con lo previsto en el artículo 135 de este reglamento.

Sección III

De la Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario

Art. 151.- Organización.- La Junta de Regulación se reunirá cuando sea convocada por su Presidente, por su propia iniciativa o a petición de sus miembros. Sus decisiones se tomarán por mayoría, teniendo el Presidente voto dirimente.

Art. 152.- Atribuciones.- La Junta de Regulación, dictará regulaciones sobre lo siguiente:

1. La instrumentación de las políticas dictadas por el Comité Interinstitucional, en lo relacionado con el Sector Financiero Popular y Solidario;
2. Los asuntos dispuestos expresamente en la ley y este reglamento;
3. Los procedimientos para la constitución, organización, funcionamiento y control de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario en lo no previsto en la ley y este reglamento;
4. Las normas de solvencia y prudencia financiera de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la ley;
5. Los requisitos y el procedimiento para la calificación de los vocales de los consejos y gerentes; y,
6. Las actividades complementarias que podrán efectuar las cooperativas.

Capítulo III

Del Control

De la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

Art. 153.- Control.- El control es la potestad asignada a la Superintendencia, para vigilar el cumplimiento de la ley, este reglamento y las regulaciones, en el ejercicio de las actividades económicas y sociales, por parte de las organizaciones sujetas a la misma. La Superintendencia, ejercerá el control en forma objetiva, profesional e independiente.

Art. 154.- Atribuciones.- La Superintendencia, además de las señaladas en la ley, tendrá las siguientes:

1. Cumplir y hacer cumplir las regulaciones dictadas por los entes de regulación;
2. Conocer y aprobar las reformas a los estatutos de las organizaciones cuya personalidad jurídica haya otorgado la Superintendencia y de aquellas incorporadas, como producto de aplicación de la ley;
3. Registrar los nombramientos de directivos y representantes legales de las organizaciones sometidas a su control;
4. Registrar la adquisición o pérdida de la calidad de integrante de las organizaciones sujetas a su control;

5. Proponer regulaciones para la Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario;
6. Revisar los informes de auditorías para su aceptación o formulación de observaciones; y,
7. Las demás atribuciones que le corresponda de acuerdo a la ley y este reglamento.

Art. 155.- Planes anuales.- La Superintendencia ejercerá sus atribuciones de control en base a planes anuales, que se elaborarán considerando la naturaleza y segmentos de las organizaciones, la aplicación de los diferentes mecanismos de control y la disponibilidad presupuestaria.

Art. 156.- Mecanismos de control.- La Superintendencia, podrá utilizar, según las necesidades y oportunidad, cualquiera de los siguientes mecanismos de control:

1. Inspección;
2. Examen Especial;
3. Auditoría; y,
4. Otros dispuestos por la Superintendencia.

La Superintendencia normará los procedimientos de los mecanismos de control.

Art. 157.- Supervisión auxiliar.- La supervisión auxiliar es una forma de colaboración en las actividades de control y vigilancia asignadas a la Superintendencia, efectuada por organismos de integración y entidades especializadas en actividades de supervisión, previamente calificadas por la Superintendencia en base a las normas, requisitos y procedimientos que ésta determine.

La Superintendencia determinará, mediante resolución, las organizaciones sujetas a supervisión auxiliar y los requisitos que deberán cumplir para su calificación las entidades que puedan cumplir esta actividad.

Las entidades de supervisión auxiliar, serán contratadas de entre las previamente calificadas y de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

La potestad sancionadora, es indelegable, por tanto, no será materia del contrato de supervisión auxiliar.

Art. 158.- Atribuciones.- Son atribuciones del Superintendente, además de las constantes en la ley, las siguientes:

1. Asesorar y absolver consultas sobre los asuntos materia de su competencia;
2. Elaborar y publicar, anualmente, información estadística, financiera y social de las organizaciones sujetas a su control;
3. Formular, aprobar y ejecutar el presupuesto de la Superintendencia; y,
4. Las demás establecidas en el presente reglamento.

Art. 159.- Delegación y avocación.- El Superintendente podrá delegar sus atribuciones, a un servidor de menor jerarquía, mediante acto expreso. El delegado responderá directamente de los actos realizados en ejercicio de tal delegación.

El Superintendente, podrá conocer asuntos cuya resolución corresponda por atribución propia o por delegación, a los órganos dependientes, cuando lo estime pertinente por motivos de oportunidad y legalidad. La resolución de avocación no será susceptible de recurso alguno.

Art. 160.- Organización interna.- La Superintendencia, contará en su organización interna, además de la intendencia mencionada en el artículo 148 de la ley, con las

intendencias y unidades administrativas que sean necesarias y que constarán en su estatuto orgánico por procesos.

Capítulo IV

Del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria

Art. 161.- Funciones del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria.- Son funciones del instituto, en el marco de su competencia, las siguientes:

1. Brindar apoyo al Comité Interinstitucional;
2. Ejecutar las políticas públicas dictadas por el Comité Interinstitucional;
3. Elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos para el fortalecimiento organizativo y funcional de las entidades que forman parte de la Economía Popular y Solidaria;
4. Ejecutar las medidas de fomento, promoción e incentivos que correspondan en favor de las personas y organizaciones sujetas a la ley, y verificar su cumplimiento;
5. Promover y fomentar los circuitos de la Economía Popular y Solidaria;
6. Generar y desarrollar estudios e investigaciones sobre la Economía Popular y Solidaria;
7. Promover y formar capacitadores para las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria;
8. Coordinar la ejecución de sus funciones, con las diferentes instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad en general;
9. Proponer al Comité Interinstitucional políticas públicas, para el desarrollo de la economía popular y solidaria, los sectores, organizaciones y personas que lo conforman;
10. Estimular y coordinar la cooperación entre las instituciones del Estado, gobiernos autónomos descentralizados, organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad en general, en acciones y programas dirigidos al desarrollo y fomento de la economía popular y solidaria;
11. Diseñar e implementar estrategias de inserción y participación de las personas y organizaciones de la economía popular y solidaria en los mercados público y privado, propiciando relaciones directas entre productores y consumidores;
12. Las demás establecidas en la ley y el reglamento.

Art. 162.- Estructura interna.- El instituto estará organizado de conformidad con el estatuto orgánico por procesos aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales.

Art. 163.- Atribuciones del Director General.- Son atribuciones del Director General del instituto, además de las establecidas en el artículo 157 de la ley, las siguientes:

1. Fijar los objetivos generales y las metas anuales y plurianuales de los programas y proyectos del instituto, en concordancia con las políticas trazadas por el Comité Interinstitucional;
2. Coordinar con el Ministerio de Inclusión Económica y Social las prioridades y estrategias para el fomento y promoción de las personas y organizaciones de la Economía Popular y Solidaria;
3. Presentar ante el Comité Interinstitucional y el Ministerio de Inclusión Económica y Social propuestas de políticas públicas para el fomento y desarrollo de la economía popular y solidaria;
4. Presentar ante las entidades estatales competentes propuestas de regulación para la Economía Popular y Solidaria;
5. Presentar ante el Comité Interinstitucional y el Ministerio de Inclusión Económica y Social los informes que le sean requeridos; y,
6. Definir el modelo de gestión del instituto.

Capítulo V

De la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

Art. 164.- Operaciones.- La corporación, podrá realizar las siguientes operaciones:

1. Desarrollar y operar mecanismos de fondeo, servicios financieros y transaccionales;
2. Otorgar servicios financieros y crediticios de segundo piso;
3. Contratar préstamos internos y externos, con la autorización previa de su Directorio;
4. Emitir obligaciones, bonos y títulos propios de la Corporación, con las condiciones, plazos y denominaciones que determine el Directorio, a fin de captar recursos, para el mantenimiento de su liquidez;
5. Invertir sus recursos, de conformidad con las políticas dictadas por el directorio, bajo criterios de seguridad, liquidez y sostenibilidad;
6. Canalizar y administrar recursos provenientes de entidades públicas o privadas nacionales o extranjeras, aplicando mecanismos de gestión financiera, tales como, constitución de fideicomisos, encargos fiduciarios y convenios de administración de fondos, en beneficio de las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario, previa la suscripción de los convenios de gestión respectivos, dentro del marco de sus competencias;
7. Invertir en emprendimientos productivos de iniciativas de las personas y organizaciones amparadas por la ley;
8. Subastar la cartera originada en operaciones con instituciones del Sistema Financiero Popular y Solidario; y,
9. Otorgar garantías crediticias a favor de emprendedores del Sector de la Economía Popular y Solidaria, con cargo al fondo que creará para el efecto.

Para la realización de las operaciones previstas en el presente artículo, la Corporación deberá contar con la autorización previa de la Superintendencia y observar las disposiciones del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, las regulaciones dictadas por la Junta de Regulación y las normas de su estatuto social.

Título VII

Del Procedimiento Administrativo Sancionador

Art. 165.- Procedimiento administrativo sancionador.- El ejercicio de la potestad sancionadora otorgada a la Superintendencia se regirá por los siguientes principios:

1. De legalidad.- Las sanciones a ser impuestas serán las previstas en la ley;
2. De tipicidad.- Las infracciones deberán encontrarse expresamente tipificadas en la ley;
3. De proporcionalidad.- En la imposición de sanciones se deberá guardar la debida proporción entre la gravedad de la infracción y la sanción aplicada, considerándose criterios de intencionalidad, perjuicio y reincidencia, en este último caso, cuando haya resolución en firme previa;
4. De la responsabilidad.- La responsabilidad en la comisión de una infracción, puede darse por acción u omisión y puede ser individual, solidaria o subsidiaria; y,
5. De la irretroactividad.- Solo se impondrán sanciones que estuvieren vigentes al momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa. Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor.

Art. 166.- Competencia.- En el procedimiento administrativo sancionador los expedientes se tramitarán y resolverán, en primera instancia, ante el Intendente que corresponda o los responsables de las oficinas provinciales o regionales, expresamente delegados para ello, en el marco de la desconcentración administrativa.

La segunda y definitiva instancia, en vía administrativa, radicará en el Superintendente.

Art. 167.- Garantía de procedimiento.- El ejercicio de la potestad sancionadora de la Superintendencia, requerirá la aplicación del procedimiento sancionador establecido en este título; en ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se hayan observado las garantías básicas del debido proceso.

Art. 168.- Actos de instrucción.- La Superintendencia de oficio, por denuncia o por petición fundamentada de otro órgano de la Administración Pública, podrá disponer la práctica de los mecanismos de control previstos en el presente reglamento, a fin de determinar la existencia o no, de infracciones tipificadas en la ley, que ameriten la apertura de un expediente administrativo y el inicio de un procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador se iniciará, mediante auto motivado, precisando la norma que le atribuye la competencia; la infracción y el, o los presuntos responsables, la sanción que se impondría, las medidas provisionales, de ser necesarias y los actos de instrucción que deban efectuarse.

Art. 169.- Requisitos.- Las denuncias que se formulen deberán contener lo siguiente:

1. La autoridad a quien se dirige;
2. Los nombres y apellidos y generales de ley del o los denunciantes;
3. La identificación del presunto infractor;
4. La relación del hecho que se denuncia;
5. El lugar para notificaciones al denunciado; y,
6. La firma o huella digital del compareciente o de su representante o procurador.

Cuando las pretensiones correspondientes a un grupo de personas, tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una sola denuncia, en la que se designará un procurador común.

Art. 170.- Citación y prueba.- Con el auto de instrucción se citará al presunto infractor, concediéndole el término de quince días para que conteste los hechos denunciados y presente las pruebas de descargo.

La Superintendencia, a petición del interesado, efectuada dentro del término probatorio y por una sola vez, concederá una prórroga de siete días adicionales, para la presentación de pruebas de descargo.

Las citaciones se realizarán por la unidad administrativa de citación de la Superintendencia o vía correo certificado o electrónico.

Cuando la citación no se pueda realizar personalmente al presunto infractor o su representante, esta será entregada en el domicilio señalado y se hará constar la identidad de quien la reciba. De no existir quien reciba la citación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, precisando el día y hora en que se intentó la citación.

Si se desconoce el domicilio del presunto infractor, la citación se efectuará por una sola ocasión, en un medio de comunicación escrito, a costo del administrado.

La publicación o razón de la citación, se incorporará al expediente.

Art. 171.- Sustanciación y audiencia.- Con la contestación al auto de instrucción o en rebeldía, luego de transcurrido el término señalado en el artículo 170 del presente reglamento, la Superintendencia, a petición del presunto infractor o de terceros interesados, convocará a audiencia, sin perjuicio que pueda convocarla, de oficio, cuando considere necesario, señalando día y hora para el efecto, en la cual se podrá alegar y presentar otros documentos y justificaciones que tengan relación con los hechos.

La audiencia se podrá solicitar dentro del periodo de prueba y se convocará y realizará dentro de los siguientes diez días de concluido dicho término.

Art. 172.- Acumulación.- La Superintendencia, podrá disponer la acumulación de autos, con otros procedimientos que guarden identidad sustancial o íntima conexión. Contra la resolución de acumulación no procederá recurso alguno.

Art. 173.- Resolución administrativa.- La Superintendencia, en el término de diez días de concluida la etapa probatoria o efectuada la audiencia, emitirá la resolución motivada que corresponda, la misma que, para su eficacia, será notificada al presunto infractor y los terceros interesados, de haberlos.

En la resolución se hará conocer a los interesados los recursos a que tienen derecho para impugnarla, tanto en vía administrativa, como en vía contencioso administrativa.

Art. 174.- Impugnación de la resolución.- La resolución o la falta de interposición de recursos, en el término que determina la ley, causarán ejecutoria. La Superintendencia adoptará las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de sus actos y resoluciones, pudiendo, inclusive, solicitar el apoyo de la fuerza pública.

Art. 175.- Recursos.- El administrado, en el término cinco días que señala la ley, podrá interponer los recursos de reposición, de apelación y extraordinario de revisión de los actos administrativos que afecten sus derechos subjetivos en forma directa y que no pongan fin a la vía administrativa.

El recurso de reposición se presentará ante la misma autoridad que dictó el acto y el de apelación ante el Superintendente; transcurrido el término señalado en la ley, únicamente, podrá interponerse recurso contencioso administrativo.

De la resolución de un recurso de reposición se podrán interponer los recursos de apelación y de revisión o la acción contencioso administrativa, a elección del recurrente y, de la resolución de un recurso de revisión, no cabrá ningún otro recurso en vía administrativa.

En la sustanciación de los recursos, únicamente se realizará, una audiencia en la cual, se presentarán documentos y se efectuarán alegaciones, por parte del presunto infractor y de terceros interesados.

Art. 176.- Aclaración del recurso.- En los recursos se precisará la norma violada y el derecho subjetivo afectado en el acto administrativo recurrido, de no hacerlo, se dispondrá su aclaración en el término de tres días y de persistir la falta de claridad, se dispondrá el archivo del expediente.

Art. 177.- Impulso.- El procedimiento se impulsará de oficio y, de acuerdo al criterio de celeridad, se dispondrá en un solo acto, la realización de todos los trámites que, por su naturaleza, no requieran de un cumplimiento sucesivo.

Art. 178.- Terceros interesados.- Durante el procedimiento sancionador podrá intervenir cualquiera persona natural o jurídica, que tuviere interés legítimo en el hecho denunciado.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- El otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones amparadas por la ley, les concede exclusividad para el uso en su razón social, de la denominación, expresiones o siglas que les identifique como "organización comunitaria, asociación EPS, o cooperativa".

Se prohíbe expresamente a otras instituciones que no se encuentren amparadas por la ley, la utilización de términos o frases que causen confusión de cualquier naturaleza con organizaciones de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.

SEGUNDA.- Los integrantes de las organizaciones amparadas por la ley, incurrirán en competencia desleal, cuando tengan la calidad de socios, accionistas, administradores, arrendatarios, apoderados de socios o accionistas de empresas privadas con idénticos fines.

TERCERA.- Para la aplicación de la Disposición General Tercera de la ley, los empleadores de los miembros, asociados o socios de las organizaciones sujetas a la ley, previa autorización de los mismos, efectuarán las retenciones a favor de dichas organizaciones en el momento del pago de sus remuneraciones, hasta por el límite establecido.

Los empleadores procederán a la entrega inmediata de los valores retenidos, a la organización que corresponda, caso contrario, serán personal y pecuniariamente responsables de su inobservancia.

CUARTA.- Los conflictos que se susciten al interior de las organizaciones y la impugnación de sanciones contra sus integrantes, podrán resolverse ante un centro de mediación debidamente calificado por la Superintendencia y a falta de acuerdo, podrán someterse al arbitraje, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación.

Los centros de mediación, para ser calificados, deberán contar con mediadores con experiencia en la solución de conflictos en organizaciones sociales, además de los requisitos que determinará la Superintendencia.

La Superintendencia podrá establecer un centro de mediación para la solución de conflictos a los que se refiere la presente norma.

Las sanciones de exclusión que no se solucionaren vía mediación, serán susceptibles de apelación ante la Superintendencia, para lo cual, el plazo para apelar transcurrirá a partir de la fecha de suscripción del acta de falta de acuerdo de mediación.

QUINTA.- Los profesionales que deseen actuar como interventores, liquidadores, o auditores internos y externos de asociaciones y cooperativas, deberán ser previamente calificados por la Superintendencia, de acuerdo con el reglamento especial que dictará para el efecto y que contemplará la aprobación de un curso de formación especializada en esas actividades.

La Superintendencia dispondrá la suspensión de la calificación de comprobarse irregularidades en las actuaciones, previa apertura de un expediente administrativo en el que se respetará el debido proceso.

SEXTA.- Las Cajas Centrales, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 102 de la ley, dentro del plazo de dos años, contados a partir de la promulgación del presente reglamento, deberán contar como socias, exclusivamente a cooperativas de ahorro y crédito.

SEPTIMA.- El inicio de las acciones judiciales tendientes a la ejecución de responsabilidades determinadas contra los directivos y administradores de las organizaciones sujetas a control de la Superintendencia, así como las transacciones con ellos, dentro o fuera de juicio, requerirán de previa resolución de asamblea general,

tomada aunque no figure en el orden del día e implican la destitución automática de dichos personeros.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- En aplicación de lo dispuesto en el número 6 del artículo 147 de la Constitución en concordancia con la letra b, del artículo 17 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, suprimase el Consejo Cooperativo Nacional que se encuentra en funciones prorrogadas.

En cumplimiento de la Novena Disposición Transitoria de la ley, el proceso de liquidación de los activos y pasivos del Consejo Cooperativo Nacional, estará a cargo del Director Nacional de Cooperativas en funciones prorrogadas; el mismo que podrá ser reemplazado por quien designe el Ministro de Inclusión Económica y Social, en caso de cesación por cualquier causa.

SEGUNDA.- El Ministerio de Inclusión Económica y Social, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la publicación del presente reglamento en el Registro Oficial, determinará el procedimiento para la conversión de las cooperativas de transporte público a cooperativas de transporte de caja común.

TERCERA.- La Superintendencia, autorizará a las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario la continuidad del funcionamiento de las oficinas operativas que hubiesen tenido abiertas a la fecha de promulgación de la ley, previo el cumplimiento de los requisitos determinados por la Junta de Regulación, caso contrario, dispondrá el cierre de dichas oficinas.

CUARTA.- Las cooperativas de ahorro y crédito que, de hecho, hubieren abierto oficinas operativas, mientras estuvo vigente la prohibición de hacerlo, esto es, a partir del 10 de mayo del 2011, deberán proceder a su cierre inmediato, transfiriendo los socios a la oficina operativa más cercana, sin perjuicio de la sanción a que se hagan acreedores los directivos y el gerente.

QUINTA.- Las cooperativas de servicios educacionales, en el tiempo que señala la ley, adecuarán sus estatutos, organización y funcionamiento, a una de las formas cooperativas constantes en este reglamento, caso contrario, deberán constituirse como otra forma jurídica, bajo pena de disolución de la cooperativa.

SEXTA.- Las fundaciones y corporaciones, creadas sobre la base de las disposiciones del Código Civil y las personas jurídicas creadas al amparo del Reglamento de Registro, Seguimiento y Control de las Entidades Financieras de las Comunidades, Pueblos, Naciones y Nacionalidades del Ecuador, publicado en el Registro Oficial No. 277, de 13 de septiembre de 2010 o por resolución de otra institución pública, en cuyo objeto social conste la prestación de servicios de ahorro y crédito y otros de carácter financiero o que, de hecho los prestaren, deberán adecuar sus estatutos a la ley y al presente reglamento, en la forma y plazos previstos en la Primera Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y se incorporarán al control de la Superintendencia caso contrario, ésta dispondrá su disolución y liquidación.

SEPTIMA.- Las peticiones presentadas y los procedimientos administrativos iniciados y que se encuentran sustanciándose en las instituciones del Estado que deben extinguirse y que, por efectos de la ley, están en funciones prorrogadas, continuarán sustanciándose por éstas, hasta que se implementen en las entidades del Estado creadas en la ley, las que los asumirán en el ámbito de sus competencias.

OCTAVA.- Para la aplicación de la Disposición Transitoria Cuarta de la ley, no se considerarán como procedimientos la intervención, disolución y liquidación de una cooperativa; estos procesos serán remitidos a la Superintendencia para su tramitación y resolución.

NOVENA.- El Superintendente, dentro de los ciento ochenta días siguientes a su posesión, emitirá el catálogo único de cuentas, al que deberán adecuar su contabilidad las organizaciones sometidas a su control.

DECIMA.- Las operaciones a las que se refiere el artículo 164 del presente reglamento, podrán ser efectuadas por el Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimientos y Economía Solidaria, hasta cuando la Superintendencia apruebe el Estatuto de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

UNDECIMA.- Los procesos judiciales en los que sean parte procesal la Dirección Nacional de Cooperativas, el Consejo Cooperativo Nacional o el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, que estuvieren siendo sustanciados ante los juzgados y tribunales de justicia, serán asumidos por el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidario que se crea en virtud de la ley, aquellos procesos judiciales en que sea parte procesal el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Dirección Nacional de Cooperativas o el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria y que se originaron en la aplicación de la Ley de Cooperativas y su Reglamento General, serán asumidos por la Superintendencia una vez que ésta se implemente; hasta tanto dichos procesos judiciales seguirán siendo defendidos por las entidades que actualmente los tienen a su cargo.

DUODECIMA.- Una vez que la Superintendencia se encuentre operativa, en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Dirección Nacional de Cooperativas, diseñarán un cronograma de transición y transferencia de bienes, valores, documentos y archivo de las cooperativas a su cargo; concluido aquello y, acorde con el cronograma, se transferirán los procesos judiciales y administrativos. Mientras el proceso de transición decurra, el Ministerio y la Dirección, presentarán a la Superintendencia, informes mensuales de las acciones realizadas, de los avances obtenidos y los siguientes procesos a ejecutarse.

DISPOSICIONES REFORMATARIAS

REFORMAS AL REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

PRIMERA.- A continuación del tercer artículo innumerado posterior al artículo 23, incorpórense los siguientes:

"Art.- Exoneración de ingresos percibidos por organizaciones previstas en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.- Para efectos de la aplicación de la exoneración de Impuesto a la Renta de los ingresos percibidos por las organizaciones previstas en la Ley Orgánica de Economía Popular y

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, se entenderá por tales, a aquellas conformadas en los sectores comunitarios, asociativos y cooperativistas, así como las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro.

De conformidad con lo señalado en la Ley de Régimen Tributario Interno, se excluye expresamente de esta exoneración a las cooperativas de ahorro y crédito, quienes deberán liquidar y pagar el impuesto a la renta conforme la normativa tributaria vigente para sociedades.

Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, el Servicio de Rentas Internas se remitirá a la información contenida en el registro público de organizaciones previstas en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, a cargo del Ministerio de Estado que tenga bajo su competencia los registros sociales.

La Administración Tributaria, a través de resolución de carácter general, establecerá los mecanismos que permitan un adecuado control respecto de la diferenciación inequívoca entre utilidades y excedentes generados por las organizaciones previstas en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario."

Art.- Para la aplicación de la exoneración del Impuesto a la Renta de los ingresos percibidos por las organizaciones previstas en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, las utilidades obtenidas por éstas, deberán ser reinvertidas en la propia organización, atendiendo exclusivamente al objeto social que conste en sus estatutos legalmente aprobados.

SEGUNDA.- A continuación del artículo 219, agréguese el siguiente artículo innumerado: "Art.- Las personas naturales que se encuentren inscritas en el Registro Social correspondiente, como unidades económicas populares, integrantes de la Economía Popular y Solidaria, podrán inscribirse en el Régimen Simplificado, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos, para tal efecto, en la Ley de Régimen Tributario Interno y este Reglamento.

DISPOSICION FINAL

El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 16 de febrero del 2012.

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

Documento con firmas electrónicas.

4.15. EL SALVADOR

ASAMBLEA LEGISLATIVA - REPUBLICA DE EL SALVADOR

INDICE LEGISLATIVO

DECRETO N° 339

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I.- Que el Art.114 de la Constitución establece que el Estado protegerá y fomentará las asociaciones cooperativas, facilitando su organización, expansión y financiamiento;

II.- Que con base a la disposición constitucional antes citada y en atención al rápido crecimiento del movimiento cooperativo en el país y a la necesidad que tienen las asociaciones cooperativas de contar con una legislación adecuada y dinámica que responda a las necesidades del Movimiento Cooperativo Salvadoreño, que le permita desarrollarse social, económica y administrativamente, es conveniente dictar la legislación correspondiente;

POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por medio de los Ministros de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social, Economía, Trabajo y Previsión Social y Agricultura y Ganadería y del Diputado Juan Bautista Ulloa,

DECRETA la siguiente:

LEY GENERAL DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS

TITULO I

DE LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS

CAPITULO I

De las disposiciones Fundamentales

Art. 1.- Se autoriza la formación de cooperativas como asociaciones de derecho privado de interés social, las cuales gozarán de libertad en su organización y funcionamiento de acuerdo con lo establecido en esta ley, la ley de creación del Instituto Salvadoreño de fomento Cooperativo (INSAFOCOOP), sus Reglamentos y sus Estatutos.

Las Asociaciones Cooperativas de producción agropecuaria, pesquera y demás similares que desarrollen actividades técnicamente consideradas como agropecuarias, también se regirán de acuerdo con lo establecido en esta ley, en lo que no estuviere previsto en su Ley Especial.

Las Cooperativas son de capital variable e ilimitado, de duración indefinida y de responsabilidad limitada con un número variable de miembros. Deben constituirse con propósitos de servicio, producción, distribución y participación.

Cuando en el texto de esta ley se mencione el termino "ASOCIACIONES COOPERATIVAS" o "COOPERATIVAS", se entenderá que se refiere también a "FEDERACIONES" o "CONFEDERACIONES".

Art. 2.- Toda Cooperativa, debe ceñirse a los siguientes principios:

- a) Libre adhesión y retiro voluntario;
- b) Organización y control democrático;
- c) Interés limitado al capital;
- ch) Distribución de los excedentes entre los Asociados, en proporción a las operaciones que éstos realicen con las Asociaciones Cooperativas o a su participación en el trabajo común;
- d) Fomento de la educación cooperativa;
- e) Fomento de la integración cooperativa.

Art. 3.- Toda cooperativa debe sujetarse a las siguientes normas:

- a) Mantener institucionalmente estricta neutralidad religiosa, racial, y política-partidista;
- b) Reconocer la igualdad de derechos y obligaciones de todos los Asociados, sin discriminación alguna;

c) Reconocer a todos los Asociados el derecho a un voto por persona, sin tomar en cuenta la cuantía de sus aportaciones en la Cooperativa. Este derecho se ejercerá personalmente y solo podrá ejercerse por medio de delegado en los casos y con las limitaciones establecidas en esta ley.

Art. 4.- Son fines de las Asociaciones Cooperativas, los siguientes:

- a) Procurar mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua, el desarrollo y mejoramiento social, económico y cultural de sus Asociados y de la comunidad, a través de la gestión democrática en la producción y distribución de los bienes y servicios;
- b) Representar y defender los intereses de sus Asociados;
- c) Prestar, facilitar y gestionar servicios de asistencia técnica a sus Asociados;
- ch) Fomentar el desarrollo y fortalecimiento del Movimiento Cooperativo a través de la integración económica y social de éste;
- d) Contribuir con el INSAFOCOOP y demás organismo del Estado relacionados con el movimiento cooperativo, en la formulación de planes y políticas vinculadas en el Cooperativismo;
- e) Los demás que procuren el beneficio de las mismas y sus miembros.

Art. 5.- Durante el período de organización de una Cooperativa, ésta podrá adoptar dicha denominación, pero agregando las palabras "en formación" y si fuere disuelta deberá conservarla agregando la frase "en liquidación".

Art. 6.- Ninguna Cooperativa podrá:

- a) Efectuar transacciones con terceras personas naturales o jurídicas, con fines de lucro, para permitirles participación directa o indirectamente en las prerrogativas o beneficios que la ley otorga a las Cooperativas;
- b) Pertenecer a entidades con fines incompatibles con los principios cooperativos, excepto cuando participen como Asociados de Instituciones cuya función sea el fomento de las Cooperativas;
- c) Realizar actividades diferentes a los fines de las Cooperativas;
- ch) Efectuar operaciones económicas que tengan el carácter de exclusividad o monopolio en perjuicio de la comunidad;
- d) integrar sus organismo directivos con personas que no sean miembros de la Cooperativa, ni con las que tengan a su cargo la gerencia, la contabilidad o la auditoría;
- e) Conceder ventaja, preferencia u otros privilegios a sus promotores, fundadores o dirigentes;
- f) Exigir a los Asociados admitidos con posterioridad a la constitución de las mismas, que contraigan obligaciones económicas superiores a las de los miembros que hayan ingresado anteriormente.

CAPITULO II

De las diferentes clases de Asociaciones Cooperativas

Art. 7.- Podrán constituirse cooperativas de diferentes clases, tales como:

- a) Cooperativas de producción;
- b) Cooperativas de vivienda;
- c) Cooperativas de servicios.

Art. 8.- Son Cooperativas de Producción, las integradas con productores que se asocian para producir, transformar o vender en común sus productos.

Art. 9.- Las Cooperativas de Producción, podrán ser entre otras de los siguientes tipos:

- a) Producción Agrícola;
- b) Producción Pecuaria;
- c) Producción Pesquera;
- ch) Producción Agropecuaria;
- d) Producción Artesanal;
- e) Producción Industrial o Agro-Industrial.

Art. 10.- Son Cooperativas de Vivienda las que tienen por objeto procurar a sus asociados viviendas mediante la ayuda mutua y esfuerzo propio.

Art. 11.- Son Cooperativas de Servicios, las que tienen por objeto proporcionar servicios de toda índole, preferentemente a sus asociados, con el propósito de mejorar condiciones ambientales y económicas, de satisfacer sus necesidades familiares, sociales, ocupacionales y culturales.

Art. 12.- Las Asociaciones Cooperativas de Servicios podrán ser entre otras de los siguientes tipos:

- a) De Ahorro y Crédito;
- b) De Transporte;
- c) De Consumo;
- ch) De Profesionales;
- d) De Seguros;
- e) De Educación;
- f) De Aprovisionamiento;
- g) De Comercialización;
- h) De Escolares y Juveniles.

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito podrán recibir depósitos de terceras personas que tengan la calidad de aspirantes a asociados. Son personas aspirantes aquellas que han manifestado su interés en asociarse y cuya calidad tendrá como límite máximo de un año. En todo caso, la Junta Monetaria autorizará las condiciones, especialmente en cuanto al tipo de interés y límites de estas operaciones.

Art. 13.- Las Cooperativas, en adición a sus actividades propias, podrán combinar simultáneamente varias o todas las actividades indicadas en los artículos anteriores.

Art. 14.- El Reglamento de la presente ley regulará las diferencias de organización y funcionamiento de los distintos tipos de Cooperativas.

CAPITULO III

De la Constitución, Inscripción y Autorización Oficial para Operar

Art. 15.- Las Cooperativas se constituirán por medio de Asamblea General celebrada por todos los interesados, con un número mínimo de asociados determinado según la naturaleza de la Cooperativa, el cual en ningún caso, podrá ser menor de quince.

En dicha Asamblea se aprobarán los Estatutos y se suscribirá el capital social, pagándose por lo menos el 20% del capital suscrito.

El acta de Constitución será firmada por todos los asociados. En caso de que hubiere asociados que no pudieren firmar, se hará constar esa circunstancia y dejarán impresa la huella digital del dedo pulgar derecho y en defecto de éste, la huella de cualquiera de sus otros dedos, y firmará a su nombre y ruego otra persona. Los interesados que desearan

constituir una Cooperativa podrán solicitar al organismo estatal correspondiente, el asesoramiento y asistencia del caso.

Art. 16.- Una vez que la Cooperativa se haya constituido, solicitará su reconocimiento oficial y su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas del INSAFOCOOP, y a fin de obtener la personalidad jurídica, la Cooperativa presentará Certificación del Acta de Constitución firmada por el Secretario del Consejo de Administración. Los asientos de inscripción, así como las cancelaciones de las mismas por disolución y liquidación de la Cooperativa inscrita, se publicará en extracto por una sola vez en el Diario Oficial. La oficina de Registro librará el mandamiento respectivo para su publicación.

Art. 17.- Las Cooperativas deben llevar al principio de su denominación las palabras "ASOCIACION COOPERATIVA" y al final de ellas las palabras "DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" o sus siglas "DE R. L.".

El INSAFOCOOP no podrá autorizar a la Cooperativa cuya denominación por igual o semejante, pueda confundirse con la otra existente.

Art. 18.- El Reglamento de esta ley, señalará requisitos y procedimientos correspondientes a la constitución o inscripción de la Cooperativa, así como a la aprobación y modificación de sus Estatutos.

TITULO II

DE LOS ASOCIADOS

CAPITULO UNICO

De los Asociados

Art. 19.- Para ser miembro de una Cooperativa, será necesario ser mayor de 16 años de edad y cumplir con los requisitos determinados por el Reglamento de esta ley, y en cada caso por los Estatutos de la Cooperativa a que se desea ingresar. Los mayores de 16 años de edad no necesitan la autorización de sus padres o sus representantes legales para ingresar como asociados, intervenir en las operaciones sociales y abonar o percibir las cantidades que les corresponda. Podrán ser miembros de las Cooperativas las personas jurídicas similares o afines que no persigan fines de lucro. Se exceptúan las Cooperativas Escolares y Juveniles las cuales estarán sujetas a un régimen especial.

Art. 20.- Los derechos y obligaciones de los asociados serán establecidos por el Reglamento de esta ley y por los Estatutos de la Cooperativa, según los fines específicos que persiga.

Art. 21.- La persona que adquiriera la calidad de asociado, responderá conjuntamente con los demás asociados, de las obligaciones contraídas por la Cooperativas antes de su ingreso a ella y hasta el momento en que se cancele su inscripción como asociado y su responsabilidad será limitada al valor de su participación.

Art. 22.- La calidad de asociado se pierde,

- a) Por renuncia voluntaria;
- b) Por exclusión con base en las causales que señalan el Reglamento de esta ley y los Estatutos de la Cooperativa;
- c) Por fallecimiento;
- ch) Por disolución de la persona jurídica asociada.

Art. 23.-El retiro del asociado es un derecho, sin embargo, podrá diferirse la devolución de sus haberes, cuando el renunciante tenga deudas exigibles a favor de la Cooperativa o cuando no lo permita la situación económica y financiera de ésta, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de esta ley o en los Estatutos de la Cooperativa.

TITULO III

DE LA INTEGRACION COOPERATIVA

CAPITULO UNICO

De las Federaciones y Confederaciones

Art. 24.- Son organizaciones de integración cooperativa, las Federaciones y Confederaciones de Asociaciones Cooperativas, que en esta ley podrán abreviarse por su orden "Federaciones y Confederaciones".

Art. 25.- Son Federaciones de Asociaciones Cooperativas las organizaciones integradas por Cooperativas, de un mismo tipo.

Corresponde a las Federaciones de Asociaciones Cooperativas:

- a) Representar y defender sus intereses y los de sus Cooperativas afiliadas;
- b) Prestar servicios, asesoría y asistencia técnica en diferentes áreas a sus cooperativas afiliadas, preferentemente;
- c) Practicar auditoría de acuerdo a la capacidad económica de la Federación;
- ch) Promover la constitución de nuevas cooperativas;
- d) Las demás que establezcan el Reglamento de esta ley y los Estatutos de la misma.

Art. 26.- Las Federaciones de Asociaciones Cooperativas se constituirán por medio de Asamblea General celebrada para tal fin por los delegados de las Cooperativas interesadas. A tal Asamblea de Constitución deberán concurrir hasta tres delegados por cada Cooperativa, nombrados por el Consejo de Administración, con derecho a un voto por Cooperativa.

Las Federaciones de Asociaciones Cooperativas se constituirán con diez o más Cooperativas y pueden afiliarse directamente a las Confederaciones, bastando para ello con que tenga la correspondiente personería jurídica otorgada por el INSAFOCOOP.

Art. 27.- Son Confederaciones de Asociaciones Cooperativas, las organizaciones integradas por lo menos con tres Federaciones de una misma clase o por cinco Federaciones de diferente clase.

Corresponde a las Confederaciones:

- a) Ejercer la representación y defensa de los intereses del Movimiento Cooperativo a nivel nacional;
- b) Fomentar el proceso permanente de integración de las Cooperativas en todos los niveles;
- c) Proponer a los organismos competentes del Estado, las medidas necesarias y convenientes para el fomento, desarrollo y perfeccionamiento del Cooperativismo;
- ch) Velar por el cumplimiento y difusión de los principios universales del Cooperativismo;
- d) Contribuir al cumplimiento de la presente ley, su Reglamento, Estatutos y demás disposiciones pertinentes.

Art. 28.- Las Confederaciones se constituirán por medio de Asamblea General celebrada para tal fin a la cual concurrirán seis miembros electos por la Asamblea General de Federaciones interesadas, debidamente autorizados.

Cada Federación tendrá derecho a seis votos.

Art. 29.- Las Federaciones y Confederaciones de Asociaciones Cooperativas podrán afiliarse a organismos cooperativos internacionales, siendo necesario para ello que el acuerdo sea tomado por su respectiva Asamblea General. Igual procedimiento debe seguirse cuando decidan retirarse.

Art. 30.- Las Federaciones y Confederaciones de Asociaciones Cooperativas tendrán los mismos privilegios, derechos y obligaciones que la presente ley y su Reglamento concedan a las Cooperativas.

Art. 31.- Las Federaciones y Confederaciones de Asociaciones Cooperativas no podrán negar la incorporación a su seno, de asociaciones cooperativas, siempre que éstas reúnan los requisitos mencionados en la presente ley.

TITULO IV

DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y VIGILANCIA

CAPITULO I

De la Dirección, Administración y Vigilancia

Art. 32.- La Dirección, Administración y Vigilancia de las Cooperativas estarán integradas por su orden:

- a) La Asamblea General de Asociados;
- b) El Consejo de Administración;
- c) La Junta de Vigilancia.

CAPITULO II

De la Asamblea General

Art. 33.- La Asamblea General de Asociados es la autoridad máxima de las Cooperativas, celebrará las sesiones en su domicilio, sus acuerdos son de obligatoriedad para el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y de todos los Asociados presentes, ausentes, conformes o no, siempre que se hubieren tomado conforme a esta ley, su Reglamento o los Estatutos.

Art. 34.- Las atribuciones de la Asamblea General de Asociados, se establecerán en el Reglamento de esta ley y en los Estatutos de la Cooperativa.

Art. 35.- Las sesiones de la Asamblea General de Asociados, serán ordinarias y extraordinarias.

La Asamblea General Ordinaria se celebrará dentro de un período no mayor a los noventa días posteriores al cierre de cada ejercicio económico. Cuando la Asamblea General Ordinaria no pudiese celebrarse dentro del período señalado, la misma podrá realizarse posteriormente, conservando tal carácter previa autorización del Instituto Salvadoreño de Fomento Agropecuario (INSAFOCOOP).

La Asamblea General Extraordinaria se celebrará cuantas veces sea necesario, y en ésta únicamente se tratarán los puntos señalados en la agenda correspondiente.

Art. 36.- Las convocatorias para celebrar sesión de Asamblea General de Asociados, ordinaria o extraordinaria, serán hechas por el Consejo de Administración, por lo menos, con quince días de anticipación. La convocatoria será hecha personalmente, por nota

escrita o por otro medio, siempre de que se deje constancia de que se hizo ésta, debiendo contener la Agenda propuesta. En las Asambleas Generales Ordinarias no será permitido tratar otros puntos una vez la Agenda propuesta haya sido aprobada por la Asamblea General. Las sesiones de Asamblea General podrán también ser convocadas por la Junta de Vigilancia o el INSAFOCOOP a solicitud del veinte por ciento por lo menos de los asociados hábiles, cuando el Consejo de Administración no lo hiciere.

Cuando la Asamblea General no fuere convocada por el Consejo de Administración, éste deberá nombrar un Presidente y un Secretario Provisional para el desarrollo de la misma y el Acta deberá asentarse en el libro respectivo u otro autorizado especialmente para tal efecto, por el Secretario Provisional.

Art. 37.- El quórum para celebrar sesiones de Asamblea General de Asociados, tanto ordinaria como extraordinaria, será de la mitad más uno por lo menos de los Asociados hábiles en primera convocatoria.

Si a la hora señalada no hubiera el quórum requerido, la Junta de Vigilancia levantará Acta en la que conste tal circunstancia, así como el número y los nombres de los asistentes a la Asamblea, cumplida esta formalidad la Asamblea podrá deliberar y tomar acuerdos válidos una hora después con un número de asociados hábiles que no sea inferior al 20% del total.

Si por falta de quórum establecido en el inciso anterior no se hubiera celebrado la Asamblea General, ésta podrá celebrarse con los asistentes en segunda convocatoria la cual será de acatamiento forzoso y deberá celebrarse por lo menos después de veinticuatro horas de la fecha en que debió celebrarse la Asamblea General. Dichas convocatorias podrán hacerse en un solo aviso.

En las Asambleas Generales, los Acuerdos se tomarán por mayoría de votos; las votaciones podrán ser públicas, secretas, o según lo establezcan los Estatutos o lo determine la misma Asamblea General.

Art. 38.- El Reglamento de esta ley y los Estatutos de las Cooperativas regularán lo relativo a los asociados hábiles para ejercer su voto, los asuntos a tratar, votaciones, formas de resoluciones, actas o cualquier otro asunto relacionado con el funcionamiento de las sesiones y acuerdos de la Asamblea General.

Art. 39.- En las Asambleas Generales de Asociados no se admitirán votos por poder, sin embargo, cuando la Cooperativa funcione a nivel nacional o regional los Estatutos podrán regular la celebración de Asamblea General integrada sólo por delegados elegidos en Asamblea General por los distintos grupos de asociados, cuando así lo justifiquen el número elevado de asociados, su residencia en localidades distintas de la sede social y otros hechos que imposibiliten la asistencia de todos sus miembros a dichas sesiones. El Reglamento de la presente ley y Estatutos señalarán los requisitos exigibles para la validez de estas sesiones.

CAPITULO III

Del Consejo de Administración

Art. 40.- El Consejo de Administración es el órgano responsable del funcionamiento administrativo de la Cooperativa y constituye el instrumento ejecutivo de la Asamblea General de Asociados, estará integrado por un número impar de miembros no menor de cinco ni mayor de siete electos por la Asamblea General de Asociados, para un período no mayor de tres años ni menos de uno, lo cual regulará el Estatuto respectivo. Estará compuesta de un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y uno o

más vocales.

Se elegirán tres miembros suplentes, los cuales deberán concurrir a las sesiones con voz pero sin voto, excepto cuando suplan a los propietarios en cuyo caso tendrán también voto. Los Estatutos de cada Cooperativa regularán los casos de suplencia.

El Presidente del Consejo tiene la representación legal, pudiendo delegarla cuando sea conveniente para la buena marcha de la Cooperativa. Podrá conferir los poderes que fueren necesarios, previa autorización del mismo Consejo.

El Consejo de Administración tiene facultades de dirección y administración plenas en los asuntos de la Asociación Cooperativa, salvo los que de acuerdo con esta ley, su Reglamento o los Estatutos, están reservados a la Asamblea General de Asociados.

CAPITULO IV

De la Junta de Vigilancia

Art. 41.- La Junta de Vigilancia ejercerá la supervisión de todas las actividades de la Cooperativa y fiscalizará los actos de los órganos administrativos así como de los empleados. Estará integrada por un número impar de miembros no mayor de cinco ni menor de tres, electos por la Asamblea General de Asociados para un período no mayor de tres años ni menor de uno, lo cual regulará el Estatuto respectivo.

Estará compuesta de un Presidente, un Secretario y uno o más Vocales. Se elegirán dos suplentes quienes deberán concurrir a las sesiones con voz pero sin voto, excepto cuando suplan a los propietarios en cuyo caso tendrán también voto.

CAPITULO V

Disposiciones Comunes a los Organos de Administración y Vigilancia

Art. 42.- Los miembros que integran los órganos directivos de las Cooperativas cuya elección sea atribución de la Asamblea General de Asociados, durarán en sus funciones de uno a tres años, no pudiendo ser electos por más de dos períodos, en forma consecutiva para el mismo órgano directivo, ni podrán ser simultáneamente miembros de más de uno de los órganos a que se refiere este artículo. No obstante lo anterior, dicha Asamblea podrá remover a cualquier directivo antes de finalizar su período, por las causales que señalen el Reglamento de esta ley y los Estatutos respectivos.

El mismo reglamento y los Estatutos de las Cooperativas regularán lo relativo a la periodicidad de los cargos directivos.

Art. 43.- Los miembros de los órganos de administración y vigilancia continuarán en el desempeño de sus funciones aunque hubiere concluido el plazo para el que fueron designados, mientras no se elijan los nuevos miembros por causa justificada y éstos no tomen posesión de su cargo. El Reglamento de ley estipulará las causales.

Art. 44.- el Reglamento de esta ley y los Estatutos de las respectivas Cooperativas, determinarán las atribuciones y las normas de funcionamiento de los órganos directivos de los mismos.

Art. 45.- en los casos que la presente ley señala el mínimo y el máximo del número de miembros de un organismo, los Estatutos de las Cooperativas fijarán el número exacto de los miembros entre ambos límites.

Art. 46.- Para ser miembro de cualquier órgano directivo se requiere ser mayor de dieciocho años de edad, excepto en el caso de las Cooperativas de Transporte, en las

cuales, para ser Presidente y Vicepresidente del Consejo de Administración será necesario ser mayor de veintiún años de edad o habilitado de edad.

Art. 47.- La estructura de los órganos directivos de las Federaciones y Confederaciones serán determinadas en los Estatutos respectivos.

Art. 48.- Los miembros de los órganos directivos son solidariamente responsables por las decisiones que tomen en contravención a las normas legales que rigen a las Cooperativas, solamente quedarán exentos aquellos miembros que salven su voto o hagan constar su inconformidad en el acta al momento de tomar la decisión o los ausentes que le comuniquen dentro de las veinticuatro horas de haber conocido el Acuerdo. La responsabilidad solidaria alcanza a los miembros de la Junta de Vigilancia por los actos que ésta no hubiera objetado oportunamente.

La acción de responsabilidad mencionada en el inciso anterior prescribirá a los diez años, a partir de la fecha de la infracción o si se ha ocultado, desde su revelación.

Art. 49.- Cuando por la incapacidad de los miembros o por otras razones justas, una Cooperativa no puede integrar sus órganos directivos con el mínimo de miembros que establece esta ley, su Reglamento y los Estatutos, los mismos podrán ser integrados por un número inferior, pero nunca menor de tres, debiendo la Cooperativa comunicar al organismo estatal correspondiente el acuerdo en tal sentido, dentro de un plazo no mayor de cinco días. Dicho Organismo estatal deberá calificar las causas y ratificar o no el acuerdo tomado.

TITULO V

DEL REGIMEN ECONOMICO

CAPITULO UNICO

Del Régimen Económico

Art. 50.- Las Cooperativas, Federaciones y Confederaciones de Asociaciones Cooperativas contarán con los recursos económicos-financieros siguientes:

- a) Con las aportaciones y los intereses que la Asamblea General resuelva capitalizar;
- b) Con los ahorros y depósitos de los asociados y aspirantes;
- c) Con los bienes muebles e inmuebles;
- ch) Con los derechos, patentes, marcas de fábrica u otros intangibles de su propiedad;
- d) Con los préstamos o créditos recibidos;
- e) Con las donaciones, herencias, legados, subsidios y otros recursos análogos que reciban del Estado o de otras personas naturales o jurídicas;
- f) Con las reservas y fondos especiales;
- g) Con todos aquellos ingresos provenientes de las operaciones no contempladas en el presente artículo.

Art. 51.- El capital social de la Cooperativa estará constituido por las aportaciones de los asociados, los intereses y excedentes capitalizados. Las aportaciones serán hechas en dinero, bienes muebles e inmuebles o derechos, de acuerdo con lo que dispongan los Estatutos de la Cooperativa según la naturaleza de ésta. La valoración de las aportaciones en bienes o derechos, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que señale el Reglamento de la presente ley, no podrá ser valorizado como aportación el trabajo personal de quienes hayan promovido las constituciones de las cooperativas. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, las aportaciones serán representadas mediante Certificados de Aportación que deberán ser nominativos e indivisibles.

Los certificados solo podrán ser transferibles previa autorización del Consejo de Administración.

Los Certificados de Aportación no son negociables y podrán representar una o mas aportaciones en las condiciones que determinen los Estatutos.

Art. 52.- Las aportaciones totalmente pagadas y que aún habiendo renunciado el asociado no hayan sido retiradas antes del cierre de cada ejercicio económico, devengarán una tasa de interés anual no mayor a las que el sistema bancario pague por ahorros corrientes.

Estas tasas de interés se calcularán a partir del último día del mes en que cada aportación fuere pagada.

Art. 53.- Será requisito indispensable, para ser admitido como asociado de una Cooperativa, pagar por lo menos el valor de una aportación y suscribirla al capital social en la forma establecida por los Estatutos.

Art. 54.- Cada asociado para mantener su calidad en la Cooperativa pagará de conformidad con los Estatutos y Reglamentos correspondientes, el valor de las aportaciones suscritas.

Art. 55.- Las aportaciones de cada asociado en las Cooperativas, no podrán exceder del diez por ciento del capital social, excepto cuando lo autorice la Asamblea General de Asociados, pero nunca podrá ser mayor del veinte por ciento del mismo.

Art. 56.- Para los efectos legales se entiende que las Cooperativas, las Federaciones y Confederaciones de Asociaciones Cooperativas no persiguen fines de lucro.

Art. 57.- Los excedentes que arroje el Estado de Resultados Anuales, serán aplicados en la siguiente forma y orden de prelación:

a) Las sumas necesarias para el fondo de educación y reserva legal de acuerdo con la naturaleza de cada tipo de Cooperativa. En ningún caso el porcentaje aplicable a la reserva legal será menor del DIEZ POR CIENTO de los excedentes, sin embargo, la reserva legal nunca podrá ser mayor del VEINTE POR CIENTO del capital pagado por los Asociados;

b) Las sumas que señalan los Estatutos o la Asamblea General de las Cooperativas para hacer frente a los compromisos relacionados con indemnizaciones laborales y cuentas incobrables, así como para otros fines específicos que se considere necesario, para lo cual se constituirán los fondos de reserva correspondiente;

c) El porcentaje para el pago de los intereses que corresponde a los asociados en proporción a sus aportaciones, cuando así lo acuerde la Asamblea General. Para este caso la tasa de interés que se pague no será mayor a la que pague el sistema bancario por ahorros corrientes;

ch) El remanente que quedará después de aplicar las deducciones anteriores se distribuirá entre los asociados, en proporción a las operaciones que hubieren efectuado con la Cooperativa o su participación en el trabajo en ella, de acuerdo con lo que disponga la Asamblea General. En las Cooperativas de Ahorro y Crédito la base a utilizarse para dicha distribución serán los intereses que los Asociados han pagado por los préstamos recibidos durante el ejercicio.

Art. 58.- El fondo de Reserva Legal se constituye:

- a) Con el porcentaje sobre los excedentes de cada ejercicio que establezcan los Estatutos, de conformidad al artículo anterior;
- b) Con las deducciones sobre las aportaciones en el caso de pérdida de la calidad de asociado por exclusión, las que serán reguladas por los Estatutos, no pudiendo ser mayores del veinte por ciento de dichas aportaciones.

Art. 59.- El Fondo de Educación se constituye:

- a) Con el porcentaje sobre los excedentes que los Estatutos o la Asamblea General de la Cooperativa determinen;
- b) Con las multas y demás sanciones que por vía disciplinaria se impongan por la Cooperativa a sus asociados;
- c) Con las subvenciones, donaciones, herencias, legados y cualquier clase de contribución recibida de los asociados o de terceros para el cumplimiento de los fines del Fondo de Educación;
- ch) Con el excedente de la revalorización de los activos una vez satisfecha la reserva legal.

La Reserva de Educación será utilizada exclusivamente en programas de promoción y educación cooperativa, evitando utilizarla para cubrir gastos de operación. Las actividades educativas serán obligatorias para las Cooperativas.

Art. 60.- La Reserva Legal tendrá los siguientes fines:

- a) Para cubrir pérdidas que pudieren producirse en un ejercicio económico;
- b) Para responder de obligaciones para con terceros.

Los Estatutos fijarán los criterios y normas para la aplicación y reposición de la Reserva Legal.

Art. 61.- Los Fondos de Reserva Legal, de Educación, Laboral y Previsión para cuentas incobrables, así como el producto de los subsidios, donaciones, herencias y legados que reciban las cooperativas no son distribuibles, por lo tanto, ningún asociado o sus herederos tienen derecho a percibir parte alguna de estos recursos.

Art. 62.- Cuando la naturaleza de una Cooperativa lo justifique, las aportaciones, los depósitos, los intereses y demás valores correspondientes a un asociado, podrán constar en una libreta individual de cuentas, en cuyo caso se omitirá la emisión de certificados de aportación, mencionados en el Régimen Económico de la presente ley.

Art. 63.- Cuando el asociado adeude parte de las aportaciones que haya suscrito, los intereses y excedentes que le correspondan por las aportaciones pagadas y otras operaciones realizadas con la Cooperativa, serán aplicados hasta donde alcancen a cubrir el saldo exigible.

Art. 64.- Las Asociaciones Cooperativas gozarán de privilegios para cobrar los préstamos que haya concedido. Asimismo gozarán de derechos de retención sobre las aportaciones, ahorros e intereses y excedentes que los asociados tengan en ella, dichos fondos podrán ser aplicados en ese orden hasta donde alcancen a extinguir otras deudas exigibles a cargo de éstos, como deudor o fiador, por obligaciones voluntarias y legales a favor de aquéllas. Los acreedores personales de los asociados no podrán embargar más que los intereses que les correspondan y a la parte de capital a que tengan derecho en caso de liquidación, cuando ésta se efectúe.

Art. 65.- Los pagadores de las dependencias del Estado, de las Instituciones Oficiales Autónomas y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, están obligados a efectuar las deducciones de los sueldos, salarios o jornales, que sus empleados o trabajadores autoricen por escrito, para aplicarse a pagos de aportaciones, ahorros, préstamos, intereses o cualquier otra obligación que como deudor o fiador en su caso, de una cooperativa contraigan hasta la completa cancelación de la misma, las sumas deducidas serán entregadas a las respectivas cooperativas de acuerdo a lo que disponga el Reglamento de esta ley.

Para que tenga aplicación lo dispuesto en este artículo es necesario que las Cooperativas lo comuniquen a los referidos pagadores comprobando que están operando legalmente mediante la Credencial del Representante Legal expedida por el Departamento de Registro del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo donde se haga constar la existencia de la Cooperativa y enviando mensualmente los listados de los asociados y el monto de los descuentos que se harán efectivos. Los trabajadores del sector privado podrán autorizar las mismas deducciones de conformidad con el procedimiento señalado en el Código de Trabajo.

Art. 66.- Las Cooperativas podrán usar sus fondos de reserva y otros disponibles, excepto la Reserva Legal y la de Educación, en inversiones de fácil convertibilidad que proporcionen beneficios para las mismas, siempre que no afecte el patrimonio y excedentes sociales.

Art. 67.- La Cooperativa podrá revalorizar sus activos, previa autorización del INSAFOCOOP. La totalidad de las sumas resultantes de la revalorización quedarán en una reserva especial, hasta que la Cooperativa haya realizado el valor de la revalorización, a medida que lo vaya realizando, éste valor incrementará necesariamente su reserva legal, sin que éste pueda exceder el máximo establecido en esta ley; en caso que excediera, pasará la diferencia al Fondo de Educación.

Art. 68.- La Asamblea General podrá autorizar que la Cooperativa obtenga a título de mutuo, para operaciones productivas específicas, una cantidad fija o proporcional establecida en relación al valor bruto de las ventas o de los servicios que la Cooperativa realice por cuenta de sus asociados en las condiciones y plazos que señalen de común acuerdo, la cooperativa y el asociado respectivo. Estos préstamos podrán ser respaldos por certificados de inversión, que serán regulados por el Reglamento de esta ley.

Art. 69.- Los recursos y cualesquiera otros bienes de la Cooperativa, así como la firma social, deberán ser utilizados únicamente para cumplir sus fines.

Los actos realizados en contravención a lo anterior no tendrán ningún valor. Los infractores de estas normas quedarán solidariamente obligados a indemnizar a la Asociación Cooperativa de los daños y perjuicios a que hubiere lugar, además de la acción penal correspondiente.

TITULO VI

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS CAPITULO UNICO

De las obligaciones de las Cooperativas, Federaciones y Confederaciones de Asociaciones Cooperativas

Art. 70.- Las Cooperativas, Federaciones y Confederaciones están obligadas a:

- a) Llevar los libros que sean necesarios para su normal desarrollo tales como: de Actas, Registro de Asociados y de Contabilidad, autorizados por el INSAFOCOOP;
- b) Comunicar por escrito al INSAFOCOOP dentro de los treinta días siguientes a su elección, la nómina de las personas elegidas para integrar los distintos órganos directivos señalados por esta ley, Reglamento de la misma y Estatutos respectivos;
- c) Enviar dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que la Asamblea General de Asociados los haya aprobado, los estados financieros del cierre del ejercicio económico los cuales deberán ser autorizados por el Presidente del Consejo de Administración, Presidente de la Junta de Vigilancia, Contador y Auditor Externo si lo hubiere;
- ch) Enviar copia en el término de quince días al INSAFOCOOP de las auditorias que le hayan practicado;
- d) Proveer al INSAFOCOOP de los datos e informes que le sean solicitados por éste.

TITULO VII

DEL REGIMEN DE PROTECCION DE LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS

CAPITULO I

Exenciones y Beneficios

Art. 71.- Los privilegios que se otorgarán por parte del Estado de acuerdo con esta ley a las Cooperativas desde el momento de su constitución, son los siguientes:

- a) Exención de impuestos de papel sellado y timbres fiscales, derechos de Registro de Inscripción de todo acto o contrato que celebren las Cooperativas a favor de terceras personas o éstas a favor de aquellas, cuando le corresponda por la ley pagarlo a la Cooperativa, así como en toda actuación judicial y administrativa en que intervenga la Cooperativa, como actora o demandada, ante los tribunales de la República;
- b) Inserción gratuita en el Diario Oficial de las publicaciones que ordene la ley o su Reglamento.

Art. 72.- Los siguientes privilegios serán concedidos a petición de la Cooperativa interesada por acuerdo ejecutivo en el Ramo de Economía, total o parcialmente, previa justificación con audiencia del Ministerio de Hacienda, por el plazo de cinco años, a partir de la fecha de sus solicitud y prorrogables a petición de la Cooperativa por períodos iguales:

- a) Exención del impuesto sobre la Renta, Vialidad y Territorial Agropecuario, cualquiera que sea su naturaleza, el capital con que se forma, intereses que se generen a partir del ejercicio fiscal durante el cual se presente la solicitud;
- b) DEROGADO (D.L. N° 45/94)
- c) Exención de impuestos fiscales y municipales sobre su establecimiento y operaciones.

Art. 73.- Si el INSAFOCOOP comprobare que una Cooperativa está haciendo mal uso de los privilegios enunciados en el artículo anterior, deberá solicitar al Ministerio de Economía que se revoquen, suspendan o restrinjan los mismos.

Art. 74.- Las Cooperativas gozarán en condiciones de igualdad, de los regímenes de protección establecidos o que se establezcan para las empresas, de cualquier naturaleza que desarrollen la misma clase de actividades.

Art. 75.- Las Federaciones y Confederaciones de Asociaciones Cooperativas gozarán de los mismos privilegios concedidos en el presente Capítulo para las Cooperativas, siempre que tramiten su otorgamiento de conformidad al inciso primero del artículo 72, de esta ley.

Art. 76.- El Estado y los municipios otorgarán en forma prioritaria concesiones a las Cooperativas para la explotación de recursos naturales, así como para prestar servicios públicos, e instalar y operar otros de la misma naturaleza.

El otorgamiento de esta concesión será de acuerdo al artículo 72, inciso primero de esta ley.

CAPITULO II

De las Acciones Procesales

Art. 77.- Toda acción ejecutiva que las Cooperativas, Federaciones y Confederaciones, entablaren para la recuperación de obligaciones económicas a favor de éstas quedará sujeta a las leyes comunes con las modificaciones siguientes:

a) Las notificaciones que deban hacerse al deudor o fiador en el juicio ejecutivo, inclusive la notificación del decreto de embargo, se harán indistintamente a la persona del deudor o fiador o al apoderado que éste o éstos designen en el instrumento que sirva de fundamento a la acción, o al que le sustituya en caso de renovación, sustitución o caducidad del respectivo mandato;

b) El término de prueba será de tres días y como excepciones únicamente se admitirán la de pago efectivo, la de error en la liquidación y la de plazo pendiente;

c) No se admitirá apelación por parte del ejecutado, del decreto de embargo, sentencia de remate y demás providencias dictadas en el juicio; * DECLARADO INCONSTITUCIONAL

ch) La Cooperativa ejecutante será la depositaria de los bienes embargados, sin obligación de rendir fianza;

d) Para la subasta de los bienes embargados se tomará por base el valúo de los bienes señalados en el instrumento respectivo, el que no podrá ser inferior a la cantidad mutuada, y en su defecto se aplicará lo establecido en el código de Procedimientos Civiles;

e) No podrá admitirse tercería alguna si no fuera fundada en título de dominio inscrito con anterioridad a la hipoteca a favor de la Cooperativa. El Juez de la causa, rechazará sin ningún trámite cualquier otra tercería;

f) No se admitirá en ningún caso, excepto en los juicios basados en créditos privilegiados, acumulación alguna de otro juicio, cualquiera que fuere su naturaleza, a la ejecución seguida por la demandante, en la que solamente se anotará la existencia de los créditos o juicios si los hubiere, a petición de los respectivos interesados. Hecha la liquidación y pago total de los créditos privilegiados y de las Cooperativas se notificará judicialmente a los otros acreedores para que hagan valer sus derechos sobre el saldo líquido sobrante si lo hubiere, mientras tanto el saldo mencionado quedará en poder del tribunal a título de depósito, hasta por un mes, contados desde el día siguiente de la última notificación a los terceros acreedores. Pasado este plazo sin que se trabé embargo en la cantidad depositada, el juez la entregará al ejecutado sin ninguna responsabilidad para él;

g) Se tiene por renunciado el domicilio del deudor y señalado el domicilio de la ejecutante, inclusive para diligencias de reconocimiento de obligaciones.

Art. 78.- Caducará el plazo de las obligaciones, contraídas a favor de la cooperativa acreedora y la obligación se volverá exigible ejecutivamente, en los casos previstos por la ley o por el contrato y especialmente:

- a) Si el deudor faltare al pago parcial o total de su deuda, a cualquiera de las cuotas de capital, intereses o administración estipulados en el contrato;
- b) Si el deudor incurriere en mora por cualquier otra deuda que tenga a favor de la Cooperativa acreedora;
- c) Cuando los bienes dados en garantía fueren embargados por terceros y el deudor fuere perturbado en su posesión;
- ch) Cuando el deudor enajenare en todo o en parte los bienes dados en garantía o constituyere sobre ellos hipotecas, usufructos, anticresis, servidumbre y otros gravámenes, sin consentimiento escrito de la Cooperativa acreedora;
- d) Cuando el préstamo otorgado se destinare total o parcialmente a fines diferentes de los indicados en el instrumento respectivo, salvo en caso de autorización escrita dada por la Cooperativa acreedora;
- e) Cuando el deudor dejare transcurrir un mes sin dar aviso a la Cooperativa acreedora, del cambio de residencia, de los deterioros sufridos por los bienes dados en garantía o de cualquier hecho susceptible de disminuir su valor o perturbar su posesión;
- f) En el caso que el deudor se negare a proporcionar datos o informes sobre el estado de los bienes dados en garantía;
- g) Si el deudor hubiere recibido préstamos destinados a costear, sostener o mejorar industrias o trabajos y no permitiere a los delegados de la Cooperativa acreedora, inspeccionar su administración o ejecución;
- h) En el caso de que el deudor al ser requerido no mejorará suficientemente la garantía, en el término indicado en el artículo siguiente.

Art. 79.- Cuando el precio de los bienes muebles o inmuebles dados en garantía a la Cooperativa acreedora, disminuyere por deterioro, desmejora, depreciación, u otro motivo, al grado de que su valor no alcanzare a cubrir el importe de la deuda y un veinticinco por ciento más, los deudores quedarán

obligados a mejorar suficientemente la garantía dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que sean requeridos al efecto por la Cooperativa acreedora, siempre que al requerimiento de la Cooperativa acreedora acompañe el dictamen de dos peritos nombrados por ella con el cual se establezca tal disminución.

El requerimiento se hará judicialmente por el Juez de primera Instancia o por medio del Juez de Paz o por acta notarial, cualquiera que fuere la cuantía de la obligación y consistirá en notificar el escrito por el cual se requiere al deudor para mejorar las cauciones y del dictamen a que se refiere el inciso anterior.

El requerimiento podrá hacerse indistintamente en la persona del deudor o fiador o al apoderado que lo represente de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 77, de esta ley.

Art. 80.- Aprobado el otorgamiento de un préstamo hipotecario por el organismo correspondiente se librará certificación por extracto del acta en que consta.

La certificación contendrá fecha del acta, nombre y apellido del interesado, monto del préstamo acordado y plazo para su amortización, y además, la mención de las inscripciones en el Registro de la Propiedad respecto al dominio y gravámenes existentes, relativos al inmueble o inmuebles ofrecidos y aceptados en garantía sin que sea necesario la descripción de dichos inmuebles. Dicha certificación, firmada por el Presidente, Gerente, Subgerente o por personas autorizadas para ello, con el sello de la Cooperativa

acreedora, se anotará preventivamente en el Registro de Hipotecas, marginándose los asientos correspondientes. Por la anotación preventiva no se cobrará tasa o derecho legal alguno, salvo cuando el préstamo exceda de Diez Mil Colones, que se pagarán dos colones por la anotación.

Los efectos de la hipoteca al ser inscrito el respectivo contrato, se retrotraen a la fecha de presentación de la certificación para ser inscrita preventivamente cuando se trate de los mismos inmuebles a que se refiere dicha inscripción.

Art. 81.- Los efectos de la anotación de la certificación a que se refiere el artículo anterior cesarán:

a) Por la inscripción definitiva del gravamen;

b) Por el aviso escrito que la Cooperativa acreedora dé al Registro o por la presentación del

acta de cancelación o escritura pública respectiva;

c) Cuando hayan transcurrido noventa días de la presentación de la certificación al Registro

de la Propiedad Raíz e Hipotecas, sin que se presente el respectivo contrato para su inscripción.

Art. 82.- Sin el consentimiento escrito de la Cooperativa Acreedora, no se podrá inscribir en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, ninguna escritura por la cual se venda, enajene, grave o de cualquier modo se constituye un derecho real sobre todo o parte de los inmuebles hipotecados a favor de la Cooperativa acreedora o sobre aquellos en que radiquen la prenda, sin que se haya hecho con ésta los arreglos convenientes sobre los actos o contratos expresados.

Art. 83.- Si la deuda fuere hipotecaria, los embargos que se traben por ejecución promovida por la Cooperativa Acreedora sobre los bienes hipotecados, ponen fin a los arrendamientos, usufructos, anticresis o cualquier otro derecho constituido con posterioridad a la inscripción de la hipoteca sobre los mismos bienes, salvo que la Cooperativa hubiere dado su consentimiento para efectuar tales operaciones.

Art. 84.- Todos los derechos y privilegios que esta ley concede a las Cooperativas acreedoras referente a los créditos otorgados originalmente a su favor, se entienden concedidos con respecto a los créditos adquiridos por las mismas cooperativas acreedoras, en virtud de traspaso hecho legalmente por terceros acreedores. Por lo contrario, tales derechos y privilegios no pasarán a favor de terceros a quienes las Cooperativas acreedoras transfieran sus créditos.

TITULO VIII

DE LA DISOLUCION, LIQUIDACION, SUSPENSION Y CANCELACION

CAPITULO UNICO

De la Disolución, Liquidación, Suspensión y Cancelación

Art. 85.- Las Asociaciones Cooperativas, podrán ser disueltas por acuerdo de la Asamblea General de Asociados, convocada exclusivamente para este fin, con la asistencia de por lo menos dos terceras partes de sus miembros. El acuerdo deberá tomarse con el voto de los dos tercios de los asociados presentes.

Art. 86.- Acordada la disolución conforme al artículo anterior, la Asamblea General antes mencionada nombrará una comisión liquidadora integrada por tres miembros de la cual

formará parte un representante del INSAFOCOOP, la que entrará en funciones dentro de los quince días siguientes a su nombramiento.

Cuando el INSAFOCOOP cancele la inscripción de la Asociación Cooperativa, ejecutoriada que sea la correspondiente resolución, ésta quedará automáticamente disuelta.

Art. 87.- En los casos de disolución por cancelación de inscripción por parte del INSAFOCOOP, o cuando la comisión liquidadora no fuere nombrada o ésta no entrare en funciones en el plazo señalado en el artículo anterior, el INSAFOCOOP procederá a designarla de oficio.

Queda prohibido a la comisión liquidadora iniciar nuevas operaciones relacionadas con los fines de la Cooperativa.

Art. 88.- Son causales para la disolución de las Asociaciones Cooperativas, las siguientes:

- a) Disminución del número mínimo de sus asociados fijados por esta ley, durante el lapso de un año;
- b) Imposibilidad de realización del fin específico para el cual fué constituido durante el plazo de seis meses o por extinción del mismo;
- c) Pérdida total de los recursos económicos o de una parte de éstos que según previsión del Estatuto o a juicio de la Asamblea General de Asociados, haga imposible la continuación de las operaciones de tales Cooperativas;
- ch) Fusión con otra Cooperativa mediante incorporación total de una en la otra o por constitución de una nueva Cooperativa, que asuma la totalidad de los patrimonios de las fusionadas; en este último caso, la disolución afectará a ambas;
- d) Cuando reiteradamente incurran en las causales que motivaron la suspensión temporal, previa comprobación.

Art. 89.- El INSAFOCOOP suspenderá temporalmente la autorización para funcionar a las Asociaciones Cooperativas, cuando realicen actividades distintas de las que constituyen su finalidad, cuando infrinjan esta ley, su Reglamento o los Estatutos de la propia Cooperativa previa investigación y comprobación de la infracción o infracciones cometidas.

El INSAFOCOOP podrá cancelar definitivamente la autorización para funcionar a tales Cooperativas, cuando reiteradamente incurran en las causales que motivaron la suspensión temporal, previa comprobación.

Art. 90.- El Reglamento de esta ley señalará los procedimientos en los casos de disolución, liquidación, suspensión y cancelación.

La comisión liquidadora, después de liquidado el activo y cancelado el pasivo, destinará el remanente hasta donde alcance, en el siguiente orden de prelación:

- a) Satisfacer los gastos ocasionados por la liquidación;
- b) Reintegrar a los asociados el valor de sus aportaciones o la parte proporcional que les corresponda, en caso de que el haber social sea insuficiente;
- c) Abonar a los asociados, los intereses de las aportaciones y los excedentes pendientes de pago;
- ch) Entregar el saldo final, si lo hubiere, a la Federación a que perteneciere, o en su defecto al INSAFOCOOP. Este fondo será aplicado exclusivamente para fines de integración y educación cooperativa.

**TITULO IX
DE LAS SANCIONES
CAPITULO UNICO**

De las Sanciones

Art. 91.- Las sanciones que el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo podrá imponer a las Asociaciones Cooperativas, serán las siguientes:

- a) Multas de CIEN A MIL COLONES mediante resolución o sentencia y previo el juicio correspondiente;
- b) Suspensión temporal de los miembros de los Organismos de Administración y Vigilancia en el ejercicio de sus cargos y sustituirlos por los suplentes respectivos;
- c) Suspensión temporal o cancelación de la autorización para operar;
- ch) Interventoría provisional, para el solo efecto de proteger los bienes y patrimonios de la Cooperativa en casos extremos de anormalidad. La Asamblea General será convocada por el INSAFOCOOP, de acuerdo a los Estatutos, y ésta se celebrará dentro de un plazo no mayor de treinta días a partir del inicio de la interventoría, durante la cual se adoptará decisión sobre la continuación o finalización de la intervención.

Art. 92.- Las sanciones contempladas en el artículo anterior, serán reguladas en el Reglamento de esta ley.

**TITULO X
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO UNICO**

De las Disposiciones Generales

Art. 93.- Al fallecer un asociado, los haberes que tenga en la Cooperativa, serán entregados al beneficiario o beneficiarios que haya designado en su solicitud de ingreso o en carta dirigida al Consejo de Administración o en defecto, a sus herederos declarados. Cuando los haberes no fueren reclamados, en un período de cinco años, a partir de la fecha de fallecimiento del asociado pasarán a formar parte de la Reserva de Educación de la Cooperativa.

Art. 94.- Las Asociaciones Cooperativas existentes deberán adecuar sus Estatutos a las disposiciones de la presente ley dentro de los siguientes doce meses de vigencia. Quedan exentas del cumplimiento de los requisitos exigidos en esta ley, para su constitución, las Federaciones o Confederaciones que a la fecha de vigencia del presente Decreto estuvieren inscritas y reconocidas por el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo.

Art. 95.- La promoción, organización, reconocimiento oficial, otorgamiento de personalidad jurídica y registro de las Asociaciones Cooperativas de Producción Agropecuaria, Pesquera y demás similares que desarrollen actividades técnicamente consideradas como agropecuarias, corresponderá al Departamento de Asociaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de conformidad a la " Ley Especial de Asociaciones Agropecuarias" contenida en el Decreto Nº 221, de la Junta Revolucionaria de Gobierno de fecha 9 de mayo de 1980, publicado en el Diario Oficial Nº 86, Tomo 267, de la misma fecha, y en todo lo previsto en dicho Decreto, se aplicarán las disposiciones de la presente ley a dichas Asociaciones.

Art. 96.- En lo que no estuviere previsto en la presente ley se aplicarán las disposiciones del derecho común que fueren compatibles con la naturaleza de la materia de que se trata.

TITULO XI
SOCIEDADES COOPERATIVAS
CAPITULO UNICO
Sociedades Cooperativas

Art. 97.- Las sociedades cooperativas al entrar en vigencia esta ley podrán continuar funcionando, con sujeción al Código de Comercio, pero no gozarán de los privilegios contenidos en esta ley, a favor de las Asociaciones Cooperativas.

Art. 98.- Las Sociedades que se organicen en el futuro, con una o más finalidades que le son propias a las clases de cooperativas, señaladas en el artículo 7 del presente decreto, podrán funcionar legalmente siempre que cumplan con las disposiciones contenidas en el Código de Comercio pero no serán consideradas Asociaciones Cooperativas, ni gozarán del régimen de protección establecido en esta ley.

TITULO XII
DE LAS DISPOSICIONES FINALES
CAPITULO UNICO
De las Disposiciones Finales

Art. 99.- El Presidente de la República dictará dentro de los noventa días siguientes a la vigencia de la presente ley, el Reglamento de la misma.

Art. 100.- Queda derogada la Ley General de Asociaciones Cooperativas emitida por Decreto Legislativo Nº 559, de fecha 25 de noviembre de 1969, publicado en el Diario Oficial Nº 229, Tomo 225, de fecha 9 de diciembre del mismo año, y las demás disposiciones en lo que se opongan a la presente ley, exceptuando la Ley Especial de Asociaciones Agropecuarias, contenida en el Decreto 221, emanado de la Junta Revolucionaria de Gobierno el 9 de mayo de 1980, publicado en el Diario Oficial Nº 86, Tomo 267, de ese mismo día, la cual, en tal caso y por ser especial, prevalecerá sobre ésta.

Art. 101.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los seis días del mes de mayo de mil novecientos ochenta y seis.

Alfonso Aristides Alvarenga, Hugo Roberto Carrillo Corleto,
Vicepresidente. Vicepresidente.

Carlos Alberto Funes, Pedro Alberto Hernández Portillo,
Secretario. Secretario.

José Humberto Posada Sánchez, Rafael Morán Castaneda,
Secretario. Secretario.

Rubén Orellana Mendoza,
Secretario.

CASA PRESIDENCIAL : San Salvador, a los catorce días del mes de mayo de mil novecientos ochenta y seis.

PUBLIQUESE,
RODOLFO ANTONIO CASTILLO CLARAMOUNT,
Vice-Presidente de la República,
Encargado del Despacho Presidencial.
Ricardo J. López,
Ministro de Hacienda.
Miguel Alejandro Gallegos,
Ministro de Trabajo y Previsión Social.
D. O. Nº 86
TOMO Nº 291
FECHA: 14 de Mayo de 1986.

DEROGATORIA PARCIAL ART. 72 LITERAL b) :
D.L. Nº 45, 30 DE JUNIO DE 1994,
D.O. Nº 148, T. 324, 15 DE AGOSTO DE 1994.
INTERPRETACION AUTENTICA AL D.L. Nº 45 DE 1994:
D.L. Nº 233, 5 DE ENERO DE 1995;
D.O. Nº 21, T. 326, 31 DE ENERO DE 1995.

REGLAMENTO:
D. E. Nº 62, EMITIDO EL 20 DE AGOSTO DE 1986, PUBLICADO EN EL D.O. Nº 7,
TOMO Nº 294
DEL 13 DE ENERO DE 1987.

INCONSTITUCIONALIDAD:

* La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por medio de Resolución en el Proceso de Inconstitucionalidad Nº 102/2007 , publicado en el Diario Oficial Nº 132, Tomo Nº 384, del 16 de Julio 2009, declara que existe la Inconstitucionalidad del Art. 77 letra c, de la Ley General de Asociaciones Cooperativas, consistente en violación al principio de igualdad procesal y al derecho de defensa, ya que aquel contiene un trato desigual que no es idóneo para alcanzar el fin que el mismo persigue.

4.16. ESPAÑA **LEY 5/2011**

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 76 Miércoles 30 de marzo de 2011 Sec. I. Pág. 33023

I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO

5708
Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PREÁMBULO

I

El marco histórico de nacimiento del concepto moderno de Economía Social se estructura a través de las primeras experiencias cooperativas, asociativas y mutualistas que surgen desde finales del siglo XVIII y se desarrollan a lo largo del siglo XIX en distintos países de Europa (Inglaterra, Italia, Francia o España). A partir de este concepto tradicional de origen decimonónico que engloba a las cooperativas, mutualidades, fundaciones y asociaciones, se fueron sucediendo en la década de los años 70 y 80 del pasado siglo y en distintos países europeos, declaraciones que caracterizan la identificación de la economía social en torno a distintos principios. De este modo, en Francia la «Charte de l'économie sociale» define el término de economía social como «el conjunto de entidades no pertenecientes al sector público que con funcionamiento y gestión democráticos e igualdad de derechos y deberes de los socios, practican un régimen especial de propiedad y distribución de las ganancias, empleando los excedentes del ejercicio para el crecimiento de la entidad y mejora de los servicios a la comunidad». En este mismo sentido, el «Conseil Wallon de l'Économie sociale» hace lo propio en Bélgica.

En 1992 el Comité Económico y Social Europeo presentó tres Propuestas de Reglamento de Estatutos de la Asociación Europea, de la Cooperativa Europea y de la Mutualidad Europea. De estas iniciativas llegó a término el Reglamento por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea (Reglamento CE 1435/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003) y la Directiva por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (Directiva 2003/72/CE del Consejo, de 22 de julio). El Reglamento caracteriza a las cooperativas como agrupaciones de personas que se rigen por principios de funcionamiento específicos diferentes de los de otros agentes económicos, caracterizados por la primacía de la persona. Esta primacía de la persona se refleja en disposiciones específicas relativas a las condiciones de adhesión, renuncia y exclusión de las socias y los socios; en la regla una persona, un voto, y en la imposibilidad de que sus integrantes ejerzan un derecho sobre el activo de la sociedad cooperativa.

La Carta de principios de la Economía Social en 2002 de la Conferencia Europea de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones (CEP-CEMAF), antecesora de la actual asociación europea de economía social (Social Economy Europe), introduce en el acervo comunitario un conjunto de principios que permiten plasmar una realidad diferenciada de las entidades de la economía social, tales como la primacía de la persona y del objeto social sobre el capital, la adhesión voluntaria y abierta, el control democrático por sus integrantes, conjunción de los intereses de las personas usuarias y del interés general, defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad, autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes públicos y el destino de los excedentes a la consecución de objetivos a favor del desarrollo sostenible, del interés de los servicios a sus integrantes y del interés social. Esta realidad palpable y concreta ha trascendido posteriormente al ámbito comunitario en el propio Parlamento Europeo, por medio del Informe 2008/2250 (INI) de 26 de enero de 2009 o en el propio Comité Económico y Social Europeo, a través de distintos dictámenes, como «Economía Social y mercado único» en el año 2000, o más recientemente el dictamen de «Distintos tipos de empresas» del año 2009. A la luz de lo expuesto, el Derecho Comparado ilustra, por lo tanto, la tendencia de los países al establecimiento de un marco jurídico de apoyo y reconocimiento de la economía social como actividad económica diferenciada que requiere de acciones sustantivas de apoyo y fomento público.

II

En España, resulta de interés destacar el sustrato jurídico en el que se fundamentan las entidades de la economía social que obtiene el más alto rango derivado de los artículos de la Constitución Española. Así ocurre en diversos artículos que hacen referencia, de forma genérica o específica, a alguna de las entidades de economía social como sucede en el artículo 1.1, en el artículo 129.2 o la propia cláusula de igualdad social del artículo 9.2, y otros artículos concretos como el 40, el 41 y el 47, que plasman el fuerte arraigo de las citadas entidades en el texto constitucional.

A partir del año 1990, en España, la economía social empieza a tener un reconocimiento expreso por parte de las instituciones públicas, con ocasión de la creación del Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social (INFES), por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre. Dicho Instituto sustituyó a la antigua Dirección General de Cooperativas y Sociedades Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y entre sus objetivos, figuró el fomento de las entidades de economía social y por ello creó en su seno el Consejo. Una vez desaparecido el Instituto en el año 1997, sus funciones fueron asumidas por la Dirección General del Fomento de la Economía Social y del Fondo Social Europeo. La Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, incorpora el Consejo para el Fomento de la Economía Social como órgano asesor y consultivo para las actividades relacionadas con la economía social, y que fue desarrollado por el Real Decreto 219/2001, de 2 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Consejo. Este Consejo, por lo tanto, se configura como la institución que dota de visibilidad al conjunto de entidades de la economía social.

A mayor abundamiento, y debido a la descentralización competencial que caracteriza el sistema territorial del Estado, existen diversas normas sustantivas de las diferentes entidades de la economía social cuya regulación se ubica también en el ámbito autonómico, dando lugar a la existencia de instituciones similares en el seno de las Comunidades Autónomas que refuerzan la visibilidad institucional de las distintas entidades que se incardinan en el referido sector.

Las sociedades cooperativas, en sus distintas modalidades, y entre ellas, las de trabajo asociado, consumo, vivienda, agrarias, servicios, mar, crédito, enseñanza, sanitarias, seguros, de transporte, las sociedades laborales, las asociaciones, fundaciones y mutualidades, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las sociedades agrarias de transformación y las cofradías de pescadores comparten los principios orientadores de la economía social. Todas estas entidades se ven reflejadas de forma directa o indirecta en los referidos artículos de la Constitución Española reuniendo los principios que les otorgan un carácter diferencial y específico respecto a otro tipo de sociedades y entidades del ámbito mercantil. Además, existe una dinámica viva de las entidades de la economía social que hace que confluyan distintas entidades singulares que también participan de los mismos principios que las anteriores.

Este rico acervo se completa con un catálogo de entidades potenciales que pueden adscribirse a la economía social, pero siempre que dichas figuras estén acotadas a los principios que determinan una peculiaridad intrínseca en valores y perfectamente delimitadas en su configuración específica.

Existen distintas iniciativas destacables que coinciden en la necesidad de aprobar una Ley de Economía Social. Por una parte, la demanda de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) con una propuesta de texto articulado y, por

otra parte, los trabajos realizados por la Subcomisión Parlamentaria del Congreso de los Diputados, que estuvo en funcionamiento desde marzo del año 2007 hasta el final de dicho año, y cuyo objetivo era el estudio de la situación de la economía social en España y proponer actuaciones para su fomento.

Por otra parte, la necesidad de aprobar una Ley de la Economía Social conecta directamente con los principios que inspiran y los objetivos que persigue la Ley de Economía Sostenible, en la medida que la economía social es, en cierto modo, precursora y está comprometida con el modelo económico de desarrollo sostenible, en su triple dimensión económica, social y medioambiental.

El Gobierno de la Nación, por medio del Consejo para el Fomento de la Economía Social y con el acuerdo de CEPES, designó una Comisión independiente de personas expertas, que en octubre de 2009 finalizó los trabajos de elaboración de estudio de una Ley de la Economía Social. Partiendo del informe de la referida Comisión y de la propuesta de CEPES, se procedió a la elaboración de un texto común que cuenta con el respaldo de gran parte del sector. Además, en el proceso de elaboración del proyecto han sido informadas las Comunidades Autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del día 29 de abril de 2010, y el propio Consejo para el Fomento de la Economía Social que en su reunión plenaria del día 29 de abril de 2010 manifestó su acuerdo mayoritario al texto.

III

El objetivo básico de la Ley es configurar un marco jurídico que, sin pretender sustituir la normativa vigente de cada una de las entidades que conforma el sector, suponga el reconocimiento y mejor visibilidad de la economía social, otorgándole una mayor seguridad jurídica por medio de las actuaciones de definición de la economía social, estableciendo los principios que deben contemplar las distintas entidades que la forman.

Partiendo de estos principios se recoge el conjunto de las diversas entidades y empresas que contempla la economía social. Asimismo, se reconoce como tarea de interés general, la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social y de sus organizaciones representativas. Además, se contempla la importancia de la interlocución de los poderes públicos con las organizaciones que representan a las distintas entidades que componen la economía social, propias por su figura jurídica y actividad, subrayando el papel a desempeñar por las confederaciones intersectoriales de ámbito estatal representativas del sector y restaurando con el encaje jurídico más acertado, el Consejo para el Fomento de la Economía Social como órgano asesor y consultivo vinculado al Ministerio de Trabajo e Inmigración, vinculándolo al sector mediante esta Ley, ya que anteriormente estaba incardinado en la legislación estatal de sociedades cooperativas.

El proyecto de Ley consta de nueve artículos, siete disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y cuatro disposiciones finales.

El artículo 1 marca el objeto de la ley, siendo éste el establecimiento de un marco jurídico común para el conjunto de las entidades que conforman el sector de la economía social y de las medidas de fomento aplicables al mismo; dando cumplimiento a lo anterior, el artículo 2 versa sobre el concepto y denominación de la economía social. El artículo 3 fija como ámbito de aplicación de la ley el de las entidades de la Economía Social que actúen en el Estado, pero sin perjuicio de las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas.

El artículo 4 presenta los cuatro principios orientadores y comunes a todas las entidades de la economía social, que son aquellas que recoge el artículo 5, bien sea mediante su denominación directa y en los términos del apartado uno, o por medio del procedimiento recogido en el apartado dos del citado precepto. El artículo 6 regula el catálogo de entidades de la economía social, que será elaborado y actualizado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración previo informe del Consejo para el Fomento de la Economía Social, no teniendo en ningún caso carácter constitutivo.

El artículo 7 recoge los principios de representación de las entidades de la economía social, y los criterios de representatividad de las confederaciones intersectoriales de ámbito estatal representativas. Por su parte, el artículo 8 cumple con otro de los objetos de la ley: el reconocimiento del fomento y difusión de la economía social.

Por último, el artículo 9 regula en esta Ley el Consejo para el Fomento de la Economía Social, órgano asesor y consultivo en la materia, con el establecimiento de sus funciones. La disposición adicional primera regula la información estadística sobre las entidades de la economía social y la disposición adicional segunda se refiere a la financiación de las actuaciones previstas en ámbito estatal.

La disposición adicional segunda regula los medios de financiación de las actuaciones de promoción, difusión y formación a las que se refiere el artículo 8.3 y del funcionamiento del Consejo para el Fomento de la Economía Social.

La disposición adicional tercera clarifica la naturaleza de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) como corporación de derecho público cuya normativa específica le confiere la consideración de entidad singular de economía social.

La disposición adicional cuarta recoge la necesidad de que el Gobierno integre a las empresas de la economía social en las estrategias para la mejora de la productividad.

La disposición adicional quinta establece que el Gobierno enviará al Congreso de los Diputados, en un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley, un informe sobre los efectos de ésta.

Hay dos disposiciones transitorias. La disposición transitoria primera mantiene la aplicación de la disposición adicional segunda de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, en tanto en cuanto no se desarrolle reglamentariamente el artículo 9.5 de esta Ley.

La disposición transitoria segunda posibilita a las cooperativas de viviendas enajenar o arrendar a terceros no socios las viviendas de su propiedad iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.

Por su parte, en la disposición final primera se determinan los títulos competenciales de esta norma, que constituye legislación básica, dictada al amparo del artículo 149.1.13.^a de la Constitución, que atribuye al Estado las «bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica», salvo lo dispuesto en los artículos 8.3 y 9, que corresponde a la competencia de autoorganización del Estado, así como lo previsto en la disposición adicional primera, que se ampara en la competencia exclusiva atribuida al Estado por el artículo 149.1.31.^a de la Constitución, en materia de «estadística para fines estatales».

La disposición final segunda habilita al Gobierno para dictar las disposiciones de aplicación y desarrollo necesarias.

Por último, la disposición final cuarta prevé una «vacatio legis» de un mes, plazo que se considera adecuado para su entrada en vigor.

Artículo 1. Objeto.

La presente Ley tiene por objeto establecer un marco jurídico común para el conjunto de entidades que integran la economía social, con pleno respeto a la normativa específica aplicable a cada una de ellas, así como determinar las medidas de fomento a favor de las mismas en consideración a los fines y principios que les son propios.

Artículo 2. Concepto y denominación.

Se denomina economía social al conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

Sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder a las Comunidades Autónomas, el ámbito de aplicación de esta Ley se extiende a todas las entidades de la economía social que actúen dentro del Estado.

Artículo 4. Principios orientadores.

Las entidades de la economía social actúan en base a los siguientes principios orientadores:

- a) Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin social, que en relación a sus aportaciones al capital social.
- b) Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad.
- c) Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad.
- d) Independencia respecto a los poderes públicos.

Artículo 5. Entidades de la economía social.

1. Forman parte de la economía social las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios establecidos en el artículo anterior.
2. Asimismo, podrán formar parte de la economía social aquellas entidades que realicen actividad económica y empresarial, cuyas reglas de funcionamiento respondan a los principios enumerados en el artículo anterior, y que sean incluidas en el catálogo de entidades establecido en el artículo 6 de esta Ley.
3. En todo caso, las entidades de la economía social se regularán por sus normas sustantivas específicas.

Artículo 6. Catálogo de entidades de economía social.

El Ministerio de Trabajo e Inmigración, previo informe del Consejo para el Fomento de la Economía Social, y en coordinación con las Comunidades Autónomas, elaborará y mantendrá actualizado un catálogo de los diferentes tipos de entidades integrantes de la economía social, teniendo en cuenta los principios establecidos en la presente ley y de forma coordinada con los catálogos existentes en el ámbito autonómico.

Los catálogos de entidades de economía social deberán ser públicos. La publicidad se hará efectiva por medios electrónicos.

Artículo 7. Organización y representación.

1. Las entidades de la economía social podrán constituir asociaciones para la representación y defensa de sus intereses, y éstas podrán agruparse entre sí, de acuerdo con lo previsto en su normativa específica o, en su caso, en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación.

2. Las Confederaciones intersectoriales de ámbito estatal representativas serán las que cumplan los siguientes requisitos:

a) Agrupar al menos a la mayoría de tipos de entidades que contempla el artículo 5 de la presente Ley.

b) Representar, al menos, el veinticinco por ciento del total de las empresas o entidades asociadas directamente o a través de organizaciones intermedias a las Confederaciones Intersectoriales que concurran al procedimiento de representatividad, siempre que dichas Confederaciones cumplan con el requisito de la letra a).

c) Representar, en al menos la mayoría de los tipos de entidades del artículo 5 que agrupe la correspondiente Confederación, como mínimo, al quince por ciento del total de las entidades o empresas de cada tipo asociadas a las confederaciones intersectoriales que concurran al procedimiento de representatividad, entendiéndose como concurrentes a aquellas Confederaciones que hayan cumplido los requisitos de las letras a) y b).

3. Las confederaciones intersectoriales de ámbito estatal representativas tendrán representación en los órganos de participación institucional de la Administración General del Estado que se ocupen de las materias que afectan a sus intereses económicos y sociales. Del mismo modo, tendrán representación en los órganos de la Administración General del Estado, las organizaciones de ámbito estatal que agrupen mayoritariamente a las entidades de la economía social, en todas aquellas actividades de representación que les sean propias por su naturaleza jurídica y actividad.

4. Asimismo, las organizaciones, federaciones o confederaciones representativas de cada Comunidad Autónoma tendrán representación en los órganos de participación institucional de las Administraciones de las Comunidades Autónomas que se ocupen de las materias que afectan a sus intereses económicos y sociales, en la forma en que se prevea por las Comunidades Autónomas.

Artículo 8. Fomento y difusión de la economía social.

1. Se reconoce como tarea de interés general, la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social y de sus organizaciones representativas.

2. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán como objetivos de sus políticas de promoción de la economía social, entre otros, los siguientes:

a) Remover los obstáculos que impidan el inicio y desarrollo de una actividad económica de las entidades de la economía social. Para ello se prestará especial atención a la simplificación de trámites administrativos para la creación de entidades de la economía social.

b) Facilitar las diversas iniciativas de economía social.

c) Promover los principios y valores de la economía social.

- d) Promocionar la formación y readaptación profesional en el ámbito de las entidades de la economía social.
 - e) Facilitar el acceso a los procesos de innovación tecnológica y organizativa a los emprendedores de las entidades de economía social.
 - f) Crear un entorno que fomente el desarrollo de las iniciativas económicas y sociales en el marco de la economía social.
 - g) Involucrar a las entidades de la economía social en las políticas activas de empleo, especialmente en favor de los sectores más afectados por el desempleo, mujeres, jóvenes y parados de larga duración.
 - h) Introducir referencias a la economía social en los planes de estudio de las diferentes etapas educativas.
 - i) Fomentar el desarrollo de la economía social en áreas como el desarrollo rural, la dependencia y la integración social.
3. Al Gobierno, para la aplicación de esta Ley, le corresponderá, con carácter general, a través del Ministerio de Trabajo e Inmigración, impulsar en su ámbito la realización de las actuaciones de promoción, difusión y formación de la economía social, sin perjuicio de las facultades de otros departamentos ministeriales en relación con la actividad económica, empresarial y social que desarrollen las entidades de economía social para el cumplimiento de su objeto social.
4. En el desarrollo de las actividades de fomento de la economía social se respetarán las competencias de las Comunidades Autónomas. Desde la Administración General del Estado se impulsarán los mecanismos de cooperación y colaboración necesarios con las Administraciones Autonómicas para el desarrollo de las actividades de fomento de la economía social.

Artículo 9. Consejo para el Fomento de la Economía Social.

1. El Consejo para el Fomento de la Economía Social se regirá por lo dispuesto en esta Ley, configurándose como órgano asesor y consultivo para las actividades relacionadas con la economía social, integrado, a través del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en la Administración General del Estado, sin participar en la estructura jerárquica de ésta. Actuará como un órgano de colaboración, coordinación e interlocución de la economía social y la Administración General del Estado.
2. De conformidad con las competencias atribuidas, y de acuerdo con el ámbito de esta ley, tendrá las siguientes funciones:
- a) Informar y colaborar en la elaboración de proyectos sobre cualquier disposición legal o reglamentaria que afecten a entidades de la economía social.
 - b) Elaborar los informes que se soliciten por el Ministerio de Trabajo e Inmigración y demás departamentos ministeriales.
 - c) Evacuar informe previo, de conformidad con el artículo 6 de esta Ley, en la elaboración y actualización del catálogo de entidades de la economía social del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
 - d) Informar los programas de desarrollo y fomento de la economía social.
 - e) Realizar estudios e informes sobre cuestiones y problemas que afecten a la economía social y en especial sobre el refuerzo del conocimiento, presencia institucional y proyección internacional de la economía social.
 - f) Velar por la promoción y el respeto a los principios orientadores de la presente Ley.
 - g) Emitir informe previo en la adopción de las medidas de información estadística de las entidades de economía social en los términos de la disposición adicional primera de la presente Ley.
 - h) Cuantas otras funciones y competencias se le atribuyan por disposiciones legales y reglamentarias.

3. El Consejo para el Fomento de la Economía Social estará compuesto por representantes de la Administración General del Estado, de las Administraciones autonómicas, de la asociación de entidades locales más representativa, de las confederaciones intersectoriales representativas de ámbito estatal, así como de las entidades sectoriales mayoritarias de la economía social referidas en el artículo 5 de esta Ley que no estén representadas por las citadas confederaciones intersectoriales, de las organizaciones sindicales más representativas y por cinco personas de reconocido prestigio en el ámbito de la economía social designadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

4. La Presidencia del Consejo para el Fomento de la Economía Social corresponderá a la persona titular de la Secretaría de Estado de Empleo.

5. El funcionamiento y composición del Consejo será objeto de desarrollo reglamentario, y se ajustará a lo dispuesto sobre órganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Disposición adicional primera. Información estadística sobre las entidades de la economía social.

El Ministerio de Trabajo e Inmigración adoptará, en colaboración y coordinación con los departamentos ministeriales y las Administraciones que pudieran tener competencia en materia registral de las entidades de la economía social, y previo informe del Consejo para el Fomento de la Economía Social, las medidas necesarias para garantizar una información estadística de dichas entidades así como de sus organizaciones de representación, periódicamente actualizada y ajustada en su clasificación al catálogo previsto en el artículo 6 de esta Ley.

Disposición adicional segunda. Financiación.

El impulso de las actuaciones de promoción, difusión y formación a las que se refiere el artículo 8.3, así como el funcionamiento del Consejo para el Fomento de la Economía Social previsto en el artículo 9, se financiarán con los créditos que el Ministerio de Trabajo e Inmigración tenga efectivamente disponibles para el ejercicio 2010, sin que puedan suponer aumento neto de gasto, conforme a lo establecido en el Plan de Acción inmediata para 2010 y, para ejercicios sucesivos, en el Plan de Austeridad de la Administración General del Estado 2011-2013.

La Administración General del Estado podrá acordar con las Comunidades Autónomas el fomento de determinadas actuaciones de promoción, difusión o formación de la economía social estableciendo al efecto los oportunos convenios de colaboración en los que se concretarán los recursos que se aporten.

Disposición adicional tercera. Ordenación Jurídica de la ONCE como entidad singular.

A los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 5 de la presente Ley, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) es una organización singular de economía social, que ajusta su ordenación y funcionamiento a lo previsto en las leyes, así como en su normativa específica de aplicación, constituida básicamente por el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, de reordenación de la ONCE y sus vigentes Estatutos; cuyos rasgos básicos y genuinos relativos a su actividad económica y empresarial, así como a su naturaleza de operador de juego de reconocido prestigio, se plasman en la presente disposición adicional.

La ONCE es una Corporación de Derecho Público de carácter social; que se rige por su normativa específica propia y cuyos fines sociales se dirigen a la consecución de la autonomía personal y plena integración de las personas ciegas y con deficiencia visual grave; mediante la prestación de servicios sociales, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar y de autoorganización; caracterizada en su actividad social, económica y empresarial, por los principios y valores de la solidaridad, la ausencia de ánimo de lucro y el interés general; que ejerce en todo el territorio español funciones delegadas de las Administraciones Públicas, bajo el Protectorado del Estado; y que, para la financiación de sus fines sociales, goza de un conjunto de autorizaciones públicas en materia de juego.

Disposición adicional cuarta. Integración de las empresas de la economía social en las estrategias para la mejora de la productividad.

El Gobierno tendrá en cuenta las especiales características de las empresas de la economía social en sus estrategias de mejora de la productividad y la competitividad empresarial.

Disposición adicional quinta. Informe del Gobierno.

El Gobierno, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Ley, remitirá al Congreso de los Diputados un informe en el que se analizarán y evaluarán los efectos y las consecuencias de la aplicación del contenido de la misma.

Disposición adicional sexta. Ejercicio de actividades sanitarias por titulados universitarios de Licenciado en Psicología o Graduado en el ámbito de la Psicología.

1. En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de Ley que regule la actividad de la «Psicología sanitaria» como profesión sanitaria titulada y regulada, definiendo las condiciones de acceso a dicha profesión y las funciones que se le reservan.

2. Transitoriamente, hasta la entrada en vigor de la Ley prevista en el apartado anterior, quienes ostenten el título de Licenciado en Psicología o alguno de los títulos de Graduado en el ámbito de la Psicología que figuren inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos como adscritos a la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud, podrán ejercer actividades sanitarias, siempre que acrediten haber adquirido una formación específica a través de alguna de las siguientes vías:

a) Por haber superado los estudios de graduado/licenciado, siguiendo un itinerario curricular cualificado por su vinculación con el área docente de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos, o con la Psicología Clínica y de la Salud.

b) Por haber adquirido una formación complementaria de posgrado no inferior a 400 horas (o su equivalente en créditos europeos), de las que al menos 100, tendrán carácter práctico, vinculada a las áreas mencionadas en la anterior letra a).

3. La acreditación de encontrarse en alguna de las situaciones previstas en el apartado anterior, permitirá solicitar la inscripción de consultas o gabinetes de psicologías en el correspondiente registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

4. Los psicólogos que desarrollen su actividad en centros, establecimientos y Servicios del Sistema Nacional de Salud, o concertados con él, para hacer efectivas las prestaciones sanitarias derivadas de la cartera de servicios comunes del mismo que correspondan a dichos profesionales, tanto en el ámbito de la atención primaria como en el de la especializada, deberán estar en posesión del título oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica al que se refiere el apartado 3 del anexo I del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la

Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada.

Disposición adicional séptima. Programa de impulso de las entidades de economía social.

El Gobierno aprobará en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, un programa de impulso de las entidades de economía social, con especial atención a las de singular arraigo en su entorno y a las que generen empleo en los sectores más desfavorecidos. Este programa entre otras reflejará las siguientes medidas:

1.º Previa consulta a las entidades representativas de la economía social, del Consejo para el Fomento de la Economía Social y de las Comunidades Autónomas, revisará la normativa necesaria para eliminar las limitaciones de las entidades de la economía social, de forma que estas puedan operar en cualquier actividad económica sin trabas injustificadas.

2.º Previa consulta a las entidades representativas de la economía social, del Consejo para el Fomento de la Economía Social y de las Comunidades Autónomas, remitirá a las Cortes un proyecto de ley que actualice y revise la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales.

3.º Previa consulta con las entidades que realizan acción social revisará la normativa de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que le es de aplicación, con el objeto de simplificar los procedimientos regulados en la misma.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable del Consejo para el Fomento de la Economía Social.

Hasta la entrada en vigor del desarrollo reglamentario previsto en el artículo 9.5 de esta Ley, el Consejo para el Fomento de la Economía Social se regirá por lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.

Disposición transitoria segunda. Cooperativas de viviendas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 89.4 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, las cooperativas de viviendas podrán enajenar o arrendar a terceros no socios, las viviendas de su propiedad iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley. En este supuesto, la enajenación o arrendamiento de las viviendas y sus condiciones generales deberán haber sido acordadas previamente por la Asamblea General. Adicionalmente, estas operaciones con terceros no socios podrán alcanzar como límite máximo el 50 por ciento de las realizadas con los socios. La Asamblea General acordará también el destino del importe obtenido por la enajenación o arrendamiento.

Disposición final primera. Título competencial.

La presente Ley constituye legislación básica dictada al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución que atribuye al Estado las «bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica». No obstante, no tendrán carácter básico:

a) Los contenidos de esta Ley que hacen referencia a la organización y funcionamiento de órganos del Estado o de órganos E.639I fdsión dinacios del os E.6(síAel artíe la)5.on

Disposición final segunda. Habilitación al Gobierno.

Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente Ley en el ámbito de sus competencias.

Disposición final tercera. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, queda modificado en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional vigésima quinta, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. La tramitación de las prestaciones y demás actos en materia de Seguridad Social, incluida la protección por desempleo, que no tengan carácter recaudatorio o sancionador se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las especialidades en ella previstas para tales actos en cuanto a impugnación y revisión de oficio, así como con las establecidas en la presente disposición adicional, en la disposición adicional quincuagésima de esta Ley o en otras disposiciones que resulten de aplicación.»

Dos. Se modifican los apartados 2 y 4 de la disposición adicional quincuagésima, que quedan redactados en los siguientes términos:

«2. Las notificaciones de los actos administrativos que traigan causa o se dicten como consecuencia de los datos que deban comunicarse electrónicamente a través del sistema RED, realizadas a los autorizados para dicha transmisión, se efectuarán obligatoriamente por medios electrónicos, informáticos o telemáticos en la sede electrónica de la Seguridad Social, siendo válidas y vinculantes a todos los efectos legales para las empresas y sujetos obligados a los que se refieran dichos datos, salvo que estos últimos hubiesen manifestado su preferencia porque dicha notificación en sede electrónica se les efectúe directamente a ellos o a un tercero.»

«4. En los supuestos previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las notificaciones que no hayan podido realizarse en la sede electrónica de la Seguridad Social o en el domicilio del interesado, conforme a lo indicado en los apartados anteriores, se practicarán exclusivamente en el tablón de edictos y anuncios de la Seguridad Social situado en dicha sede electrónica, no procediendo su publicación por ningún otro medio.

Transcurridos veinte días naturales desde que la notificación se hubiese publicado en el tablón de edictos y anuncios de la Seguridad Social, se entenderá que la misma ha sido practicada, dándose por cumplido dicho trámite y continuándose con el procedimiento.

El tablón de edictos y anuncios de la Seguridad Social será gestionado por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. La práctica de la notificación en el mismo se efectuará en los términos que se determinen por orden del Ministerio de Trabajo e Inmigración.»

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor al mes de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 29 de marzo de 2011.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

4.17. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

THE FEDERAL CREDIT UNION ACT **REVISED JUNE 2007**

NATIONAL CREDIT UNION ADMINISTRATION **ALEXANDRIA, VIRGINIA 22314**

NCUA 8002 M 3601

FOREWORD

This publication contains the provisions of the Federal Credit Union Act of June 26, 1934, as amended. In the left margin of this publication, opposite each section, is printed the section number of such provision in Title 12 of the United States Code and supplements thereto. The number in the right-hand margin is the section of the Federal Credit Union Act, as amended, of which the provision is a part, unless another statute is cited.

The symbol "12 U.S.C." refers to Title 12 of the United States Code and supplements thereto. The symbol "FCU Act" refers to the Federal Credit Union Act, as amended. Amendments to this publication will be provided from time to time as the FCU Act is amended.

The administration of the Federal Credit Union Act was originally vested in the Farm Credit Administration and in the Governor thereof. (Act of June 26, 1934, 48 Stat. 1216.) Executive Order No. 9148, dated April 27, 1942 (7 F.R. 3145), transferred the functions, powers and duties of the Farm Credit Administration and of the Governor under the Federal Credit Union Act, as amended, to the Federal Deposit Insurance Corporation. This transfer became effective on May 16, 1942, and was to expire at the termination of Title I of the First War Powers Act, 1941 (Public Law 354, 77th Cong.). Reorganization

Plan No. 1, effective July 1, 1947 (61 Stat. 952, 12 F.R. 4534), made the transfer permanent. Effective July 29, 1948, the powers, duties and functions transferred to the Federal Deposit Insurance Corporation were transferred to the Federal Security Agency. (Act of June 29, 1948, 62 Stat. 1091.) Reorganization Plan No. 1 of 1953, effective April 11, 1953, abolished the Federal Security Agency and transferred the Bureau of Federal Credit Unions, together with other agencies of the Federal Security Agency, to the Department of Health, Education, and Welfare. (67 Stat. 631, 18 F.R. 2053.)

Public Law 86-354 (73 Stat. 628, et seq.) approved on September 22, 1959, amended the Federal Credit Union Act. (June 26, 1934, 48 Stat. 1216; 12 U.S.C. Sec. 1751-1772) and reenacted the entire act. Public Law 88-150 (Oct. 17, 1963, 77 Stat. 270) amended sections 11 and 13. Public Law 88-353 (July 2, 1964, 78 Stat. 269) amended sections 8, 12, 14, and 15, and made section 1014 of Title 18 of the United States Code applicable to Federal credit unions.

Public Law 90-188 (December 13, 1967, 81 Stat. 567) amended sections 15 and 18 of the Federal Credit Union Act. Public Law 89-429 (May 24, 1966, § 7, 80 Stat. 167) and

Public Law 90–44 (July 3, 1967, §§ 2, 3, 81 Stat. 110) amended section 8 of the Act. In addition, Public Law 89–287 (October 22, 1965, § 16, 79 Stat. 1048, 20 U.S.C. § 995) and Public Law 89–329 (November 8, 1965, § 434, 79 Stat. 1247, 20 U.S.C. § 1084) made the provisions of the National Vocational Student Loan Insurance Act of 1965 and the insured student loan provisions (Part B, Title IV) of the Higher Education Act of 1965 applicable to Federal credit unions. Public Law 90–575 (October 16, 1968, § 116, 82 Stat. 1024) repealed the National Vocational Student Loan Insurance Act of 1965 and merged the program into the Higher Education Act. The law also amended section 434 of the Higher Education Act to permit continued participation by Federal credit unions in both programs under the same restrictions as previously authorized.

Public Law 90–375 (July 5, 1968, 82 Stat. 284) amended sections 8, 14, 15, 16, and 21 of the Federal Credit Union Act and added a new section 28. Public Law 90–448 (August 1, 1968, § 807, 82 Stat. 545) amended section 8.

Public Law 91–206 (March 10, 1970, 84 Stat. 49) amended sections 2, 3, and 21 of the Federal Credit Union Act. It created the National Credit Union Administration as an independent agency and transferred all of the functions of the Bureau of Federal Credit Unions to the new Administration.

Public Law 91–468 (October 19, 1970, 84 Stat. 994) redesignated sections 2–28 as sections 101–127, respectively; amended sections 101, 107, and 116; and enacted Title II—Share Insurance.

Public Law 92–221 (December 23, 1971, 85 Stat. 796) amended section 201(c)(2); added a new section 201(c)(3); and amended section 208(a)(2).

Public Law 93–383 (August 22, 1974, 88 Stat. 739) amended sections 107(6), (8)(e), and (9), 113, 115, 117, 126, 202(h), 206 (a), (c), and (d), and 208(a)(1).

Public Law 93–495 (October 29, 1974, 88 Stat. 1500) amended sections 107(7), 111, and 207(c).

Public Law 93–569 (December 31, 1974, 88 Stat. 1866) amended section 107(5).

Public Law 93–604 (January 2, 1975, 88 Stat. 1964) amended section 209(b)(2).

Public Law 94–273 (April 21, 1976, 90 Stat. 375) amended section 203(d)(2).

Public Law 95–22 (April 19, 1977, 91 Stat. 49) amended sections 101, 107 (5), (6), (7), (8), (13), and (14), 113, 114, 116, 117, 120, 201(c)(3), 206 (g)(1) and (g)(2).

Public Law 95–147 (October 28, 1977, 91 Stat. 1227) added a new section 210 and redesignated section 210 as section 211.

Public Law 95–630 (November 10, 1978, 92 Stat. 3641) amended sections 101, 102, 105, 106, 107, 201, 202, 206(e), 206(f) (1) and (2), 206(g) (3) and (4), 206(h), 206(i) (1) and (2), 208; renumbered sections 101 and 206(j); added new sections 206(j)(1), and 207(c)(3); and enacted Title III, the Central Liquidity Facility, sections 301–310. In addition to creating the National Credit Union Central Liquidity Facility, the law restructured this Agency from an Administrator to a three-person Board.

Public Law 96–153 (December 21, 1979, 93 Stat. 1120) amended sections 107(6) and 207 of the Federal Credit Union Act to permit the acceptance of share purchases and insurance coverage of such purchases by offices, employees or agents of Indian tribes having official custody of tribal funds.

Public Law 96–221 (March 31, 1980, 94 Stat. 132) amended sections 101, 107, 117, 205, 207, 302, 304, 305, 307, and 308. These amendments included increased maximum loan rates for Federal credit unions, permanent share draft authority for all federally-insured credit unions, increased share insurance coverage from \$40,000 to \$100,000 per member, a six-year phase out of controls on Federal credit union dividend rates, a Federal override of certain state usury ceilings for federally insured state credit unions, and settlement and share draft processing authority for the Central Liquidity Facility.

Public Law 97–320 (October 15, 1982, 96 Stat. 1469) amended sections 101, 102, 103, 105, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 120, 124, 125, 202, 203, 205, 206 and 307 of the Federal Credit Union Act and added a new section 311. (Note: The amendments to sections 205 and 206 are terminated on October 14, 1985.)

Public Law 97–457 (January 12, 1983, 96 Stat. 2507) amended sections 107, 113, 124, and 202. These were technical corrections to Public Law 97–320.

Public Law 98–369 (July 18, 1984, 98 Stat. 1203) amended sections 201(b)(8), 202 (b), (c), (c)(3); repealed section 202(c)(4); amended sections 202 (d), (e), (f), (g), (h)(1), (h)(2), and (h)(3), 203(b), 206(d)(1), and 303 of the Federal Credit Union Act and added a new section 312. These amendments included share insurance capitalization and CLF tax exemption.

Public Law 100–86 (August 10, 1987, 101 Stat. 652) (CEBA) amended sections 107(5)(A)(ii), 107(6), 112, 113(1), 118, 120(i)(2), 128, 129, 206 (g), (h), (h)(1), (h)(2)(b), and 207(a)(1).

Public Law 101–73, the Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act (FIRREA) (August 9, 1989) amended sections 120, 202, 203, 204, 205, 206, and 207 and added sections 212, 213 and 214.

Public Law 101–647, the Crime Control Act of 1990 (November 29, 1990) amended sections 206(j)(1) and 206(s), and added sections 206 (t) and (u), and 207(b)(2) (G), (H) and (I), 207(b)(16), and 207 (q) and (r).

Public Law 102–242, the Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act (FDICIA), (December 19, 1991) amended section 202(d) and 213.

Public Law 102–550, the Housing Community Development Act, (October 28, 1992) added section 131 and amended sections 202, 206 and 213.

Public Law 103–60, the National Defense Authorization Act (November 30, 1993) amended section 124.

Public Law 103–322, the Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994 (September 13, 1994) amended Section 205(d).

Public Law 103–325, the Riegle Community Development and Regulatory Improvement Act of 1994 (September 23, 1994) added new sections 107(15)(C), 130 and 204(e) and deleted section 120(k).

Public Law 104–208, Economic Growth and Regulatory Reduction Act of 1996 (September 30, 1996) amended section 107(5)(A)(iv) and (v) and added a new subsection (e) to section 201.

Public Law 105–164, Examination Parity and Year 2000 Readiness for Financial Institutions Act (March 20, 1998) added new section 206A. This section ceases to be effective as of 12/31/2001 (see section 206A(f)).

Public Law 105–219, Credit Union Membership Access Act (August 7, 1998) amended sections 102a(b), 109, 202(a)(6), 202(b), 202(c), 202(h), 205(b), 206(h), 206(k), and 207(a); repealed section 116; and added new sections 107A and 216.

Public Law 108-458 (December 17, 2004) added Section 206(w).

Public Law 109-8 (April 20, 2005) amended Section 207(c).

Public Law 109-173 (February 15, 2006) amended Section 205(a), 207(k).

Public Law 109-351 – Financial Services Regulatory Relief Act (October 13, 2006) amended various sections.

FEDERAL CREDIT UNION ACT TABLE OF CONTENTS

Sec.

1751. Short title.

TITLE I—GENERAL PROVISIONS

1752. Definitions.

1752a. National Credit Union Administration.

(a) Establishment; management under National Credit Union Administration Board.

(b) Membership of Board; designation of Chairman.

(c) Term of office.

(d) Management of Administration vested in Board; adoption of rules; quorum; report to President and Congress.

(e) Functions of Chairman.

(f) Audit by General Accounting Office.

1753. Federal credit union organization.

1754. Approval of organization certificate.

1755. Fees.

(a) Payment by Federal credit unions to Administration.

(b) Determination of amount, assessment periods, and payment dates.

(c) Supervision charge exception; waiver of payment.

(d) Payment into Treasury of United States.

(e) Investment by Treasury.

1756. Reports and examinations.

1757. Powers.
1757a. Limitation on member business loans.
1758. Bylaws.
1759. Membership.
(a) General.
(b) Membership field.
(c) Exceptions.
(d) Multiple common-bond credit union group requirements.
(e) Additional membership eligibility provisions.
(f) Criteria for expansion of multiple common-bond credit unions.
(g) Regulations required for community credit unions.
1760. Members' meetings.
1761. Management; board of directors; credit committee; supervisory committee; compensation.
1761a. Executive officers; general manager.
1761b. Board of directors; meetings; powers and duties; executive committee; membership officers; membership application.
1761c. Credit committee; meetings; powers and duties; loans and lines of credit; security.
1761d. Supervisory committee; powers and duties; suspension of members; passbook.
1763. Dividends.
1764. Expulsion and withdrawal.
1765. Minors.
1766. Powers of Board and Administration personnel.
1767. Fiscal agents and depositories.
1768. Taxation.
1769. Separability of provisions; right to alter, amend, or repeal chapter.
1770. Allotment of space in Federal buildings.
1771. Conversion from Federal to State credit union and from State to Federal credit union.
1772. Territorial application of chapter.
1772a. Gifts; acceptance of conditional gifts; deposit.
1772b. Apportionment.
1772c. Trust Fund.
1772c-1. Community development revolving loan fund for credit unions.
1772d. Forfeiture of organization certificate for money laundering or cash transaction reporting offenses.

TITLE II—SHARE INSURANCE

1781. Insurance of member accounts.
(a) Eligibility.
(b) Application; agreement.
(c) Approval of application.
(d) Certificate of insurance.
(e) Prohibition on certain associations.
1782a. Administration of insurance fund.
(a) Reports of condition.
(b) Certified statements.

- (c) Deposit with National Credit Union Share Insurance Fund; amount, return, distribution, etc.
 - (d) Remedy for failure to report; penalty for failure to file certified statement or pay premium; dispute as to deposit of premium charge; prohibition on distribution of assets or dividends while in default.
 - (e) Recovery of unpaid deposit or premium; limitations.
 - (f) Penalty for failure to comply with section; court determination of failure; remedies not exclusive.
 - (g) Records.
 - (h) Definitions.
1783. National Credit Union Share Insurance Fund.
- (a) Creation; use of fund.
 - (b) Deposit of deposits and premium charges; reporting requirements.
 - (c) Investment authorization.
 - (d) Loans to fund; limitation and terms; interest accrual; determination of interest rate.
 - (e) Excess funds credited against loans.
 - (f) Authorization for fund to borrow from Central Liquidity Facility.
1784. Examination of insured credit unions.
- (a) Examiners and claim agents; powers; report by examiner; jurisdiction of court.
 - (b) Power of Board; jurisdiction of court.
 - (c) Court orders enforcing subpoenas; immunity.
 - (d) Administration acceptance of State board reports; reports of Board furnished to State board.
 - (e) Flood insurance compliance by insured credit unions.
1785. Requirements governing insured credit unions.
- (a) Insurance logo.
 - (b) Restrictions.
 - (c) Considerations for waiver of enforcement of restrictions.
 - (d) Prohibitions.
 - (e) Security standards; reports; penalty.
 - (f) Share draft accounts; maintenance, loans, etc.
 - (g) Interest rates.
 - (h) Emergency merger.
 - (i) Emergency purchase of assets; conversion to insured deposits.
 - (j) Privileges not affected by disclosure to banking agency or supervisor.
1786. Termination of insured credit union status; cease and desist orders; removal or suspension from office; procedure.
- (a) Termination of insurance.
 - (b) Unsound condition of credit union; notice to correct condition; hearing; judicial review.
 - (c) Notice to members of termination of insured status.
 - (d) Continuation of insurance for one year; approval of conversion of status; procedure subsequent to approval; reduction of premium charges.
 - (e) Opinion of Board as to unsound condition of credit union; notice of charges; hearing; order to cease and desist; judicial review.
 - (f) Temporary cease and desist order; injunctive procedure.
 - (g) Removal and prohibition authority.
 - (h) Board's self-appointment as conservator; consultation with state authority.
 - (i) Suspension, removal, and prohibition from participation orders in the case of certain criminal offenses.

- (j) Jurisdiction of hearing; procedure; judicial review.
 - (k) Jurisdiction and enforcement; penalty.
 - (l) Criminal penalty for violation of certain orders.
 - (m) Definitions.
 - (n) Notice or order to State board supervising State-chartered credit union.
 - (o) Notice of proceedings to State board supervising State-chartered credit union; effect of corrective action by State board; attack on validity of notice or order.
 - (p) Proceedings, powers of Board; court enforcement of subpoenas; witness fees; expenses and attorneys' fees.
 - (q) Compliance with monetary transaction recordkeeping and report requirements.
 - (r) Institution-affiliated party defined.
 - (s) Public disclosure of agency action.
 - (t) Regulation of certain forms of benefits to institution-affiliated parties.
 - (u) Foreign investigations.
 - (v) Termination of insurance for money laundering or cash transaction reporting offenses.
 - (w) One-year restrictions on federal examiners of insured credit unions.
- 1787. Payment of insurance.**
- (a) Liquidation by Board; show cause order; notice to claimants; subrogation; dividend payments; bond; appointment of agent; fees to be fixed by Board.
 - (b) Powers and duties of Board as conservator or liquidating agent.
 - (c) Provisions relating to contracts entered into before appointment of conservator or liquidating agent.
 - (d) Payment of insured deposits.
 - (e) Subrogation of Board.
 - (f) Valuation of claims in default.
 - (g) Limitation on court action.
 - (h) Liability of directors and officers.
 - (i) Damages.
 - (j) Board as liquidating agent of State-chartered credit union.
 - (k) Payment of insured accounts; extent of insurance coverage; proof of claims; insurance of public funds; insurance regarding pension and profit-sharing plans.
 - (l) Payment; discharge of liability.
 - (m) Undisclosed names.
 - (n) Withholding of payment due to liability of credit union member.
 - (o) Unclaimed insured accounts; limitations.
 - (p) Sale of assets; security for loans; approval of court; agreements affecting interest of Board in any asset acquired by it.
 - (q) Prohibition on certain acquisitions of assets.
 - (r) Foreign investigations.
- 1788. Special assistance to avoid liquidation.**

FEDERAL CREDIT UNIONS

Chapter 14 of Title 12 of the United States Code, as revised June 2007

§ 1751

Short Title.—This chapter may be cited as the “Federal Credit Union Act.” * See note.

Title I—General Provisions

§ 1752 § 101 Definitions.—As used in this chapter—

(1) the term “Federal credit union” means a cooperative association organized in accordance with the provisions of this chapter for the purpose of promoting thrift among its members and creating a source of credit for provident or productive purposes;

(2) the term “Chairman” means the Chairman of the National Credit Union Administration Board;

(3) the term “Administration” means the National Credit Union Administration;

(4) the term “Board” means the National Credit Union Administration Board;

(5) the terms “member account” and “account” mean a share, share certificate, or share draft account of a member of a credit union of a type approved by the Board which evidences money or its equivalent received or held by a credit union in the usual course of business and for which it has given or is obligated to give credit to the account of the member, and, in the case of a credit union serving predominantly low-income members (as defined by the Board), such terms (when referring to the account of a nonmember served by such credit union) mean a share, share certificate, or share draft account of such nonmember which is of a type approved by the Board and evidences money or its equivalent received or held by such credit union in the usual course of business and for which it has given or is obligated to give credit to the account of such nonmember, and such terms mean share, share certificate, or share draft accounts of nonmember credit unions and nonmember units of Federal, State, or local governments and political subdivisions thereof enumerated in section 207 of this Act, and such terms mean custodial accounts established for loans sold in whole or in part pursuant to section 107(13) of this Act: Provided, That for purposes of insured State credit unions, reference in this paragraph to “share,” “share certificate” or “share draft” accounts includes, as determined by the Board, the equivalent of such accounts under State law;

(6) the terms “State credit union” and “State-chartered credit union” mean a credit union organized and operated according to the laws of any State, the District of Columbia, the several territories and possessions of the United States, the Panama Canal Zone, or the Commonwealth of Puerto Rico, which laws provide for the organization of credit unions similar in principle and objectives to Federal credit unions;

* Note: The Congress finds the following:

(1) The American credit union movement began as a cooperative effort to serve the productive and provident credit needs of individuals of modest means.

(2) Credit unions continue to fulfill this public purpose, and current members and membership groups should not face divestiture from the financial services institution of their choice as a result of recent court action.

(3) To promote thrift and credit extension, a meaningful affinity and bond among members, manifested by a commonality of routine interaction, shared and related work experiences, interests, or activities, or the maintenance of an otherwise wellunderstood sense of cohesion or identity is essential to the fulfillment of the public mission of credit unions.

(4) Credit unions, unlike many other participants in the financial services market, are exempt from Federal and most State taxes because they are member-owned, democratically operated, not-for-profit organizations generally managed by volunteer boards of directors and because they have the specified mission of meeting the credit and savings needs of consumers, especially persons of modest means.

(5) Improved credit union safety and soundness provisions will enhance the public benefit that citizens receive from these cooperative financial services institutions.

(7) the term “insured credit union” means any credit union the member accounts of which are insured in accordance with the provisions of subchapter II of this chapter, and the term “noninsured credit union” means any credit union the member accounts of which are not so insured;

(8) the term “Fund” means the National Credit Union Share Insurance Fund; and

(9) the term “branch” includes any branch credit union, branch office, branch agency, additional office, or any branch place of business located in any State of the United States, the District of Columbia, the several territories, including the trust territories, and possessions of the United States, the Panama Canal Zone, or the Commonwealth of Puerto Rico, at which member accounts are established or money lent. The term “branch” also includes a suboffice, operated by a Federal credit union or by a credit union authorized by the Department of Defense, located on an American military installation in a foreign country or in the trust territories of the United States.

§ 1752a § 102

National Credit Union Administration.—

(a) There is hereby established in the executive branch of the Government an independent agency to be known as the National Credit Union Administration. The Administration shall be under the management of a National Credit Union Administration Board.

(b) Membership and Appointment of Board.—

(1) In general.—The Board shall consist of three members, who are broadly representative of the public interest, appointed by the President, by and with the advice and consent of the Senate. In appointing the members of the Board, the President shall designate the Chairman. Not more than two members of the Board shall be members of the same political party.

(2) Appointment criteria.—

(A) Experience in financial services.— In considering appointments to the Board under paragraph (1), the President shall give consideration to individuals who, by virtue of their education, training, or experience relating to a broad range of financial services, financial services regulation, or financial policy, are especially qualified to serve on the Board.

(B) Limit on appointment of credit union officers.—Not more than one member of the Board may be appointed to the Board from among individuals who, at the time of the appointment, are, or have recently been, involved with any insured credit union as a committee member, director, officer, employee, or other institution-affiliated party.

(c) The term of office of each member of the Board shall be six years except that the terms of the two members, other than the Chairman, initially appointed shall expire one upon the expiration of two years after the date of appointment, and the other upon the expiration of four years after the date of appointment. Board members shall not be appointed to succeed themselves except the initial members appointed for less than a sixyear term may be reappointed for a full sixyear term and future members appointed to fill unexpired terms may be reappointed for a full six-year term. Any Board member may continue to serve as such after the expiration of said member’s term until a successor has qualified.

(d) The management of the Administration shall be vested in the Board. The Board shall adopt such rules as it sees fit for the transaction of its business and shall keep permanent and complete records and minutes of its acts and proceedings. A majority of the Board shall constitute a quorum. Not later than April 1 of each calendar year, and at such other times as the Congress shall determine, the Board shall make a report to the President and to the Congress. Such a report shall summarize the operations of the Administration and

set forth such information as is necessary for the Congress to review the financial program approved by the Board.

(e) The Chairman of the Board shall be the spokesman for the Board and shall represent the Board and the National Credit Union Administration in its official relations with other branches of the Government. The Chairman shall determine each Board member's area of responsibility and shall review such assignments biannually. It shall be the Chairman's responsibility to direct the implementation of the adopted policies and regulations of the Board.

(f) The financial transactions of the Administration shall be subject to audit by the General Accountability Office in accordance with the principles and procedures applicable to commercial corporate transactions and under such rules and regulations as may be prescribed by the Comptroller General of the United States. The audit shall be conducted at the place or places where the accounts of the Administration are kept.

§ 1753 § 103

Federal credit union organization.—

Any seven or more natural persons who desire to form a Federal credit union shall each subscribe either individually or collectively before some officer competent to administer oaths an organization certificate in duplicate which shall specifically state—

- (1) the name of the association;
- (2) the location of the proposed Federal credit union and the territory in which it will operate;
- (3) the names and addresses of the subscribers to the certificate and the number of shares subscribed by each;
- (4) the initial par value of the shares;
- (5) the proposed field of membership, specified in detail;
- (6) the term of the existence of the corporation, which may be perpetual; and
- (7) the fact that the certificate is made to enable such persons to avail themselves of the advantages of this chapter.

Such organization certificate may also contain any provisions approved by the Board for the management of the business of the association and for the conduct of its affairs and relative to the powers of its directors, officers, or stockholders.

§ 1754 § 104

Approval of organization certificate.—

The organization certificate shall be presented to the Board for approval. Before any organization certificate is approved, an appropriate investigation shall be made for the purpose of determining (1) whether the organization certificate conforms to the provisions of this chapter; (2) the general character and fitness of the subscribers thereto; and (3) the economic advisability of establishing the proposed Federal credit union. Upon approval of such organization certificate by the Board it shall be the charter of the corporation, and one of the originals thereof shall be delivered to the corporation after the payment of the fee required therefor.

Upon such approval the Federal credit union shall be a body corporate and as such, subject to the limitations herein contained, shall be vested with all of the powers and charged with all of the liabilities conferred and imposed by this chapter upon corporations organized hereunder.

§ 1755 § 105

Fees.—

(a) In accordance with rules prescribed by the Board, each Federal credit union shall pay to the Administration an annual operating fee which may be composed of one or more charges identified as to the function or functions for which assessed.

(b) The fee assessed under this section shall be determined according to a schedule, or schedules, or other method determined by the Board to be appropriate, which gives due consideration to the expenses of the Administration in carrying out its responsibilities under this Act and to the ability of Federal credit unions to pay the fee.

The Board shall, among other things, determine the periods for which the fee shall be assessed and the date or dates for the payment of the fee or increments thereof.

(c) If the annual operating fee is composed of separate charges, no supervision charge shall be payable by a Federal credit union, and the Board may waive payment of any or all other charges comprising the fee, with respect to the year in which its charter is issued, or in which final distribution is made in its liquidation or the charter canceled.

(d) All operating fees shall be deposited with the Treasurer of the United States for the account of the Administration and may be expended by the Board to defray the expenses incurred in carrying out the provisions of this Act including the examination and supervision of Federal credit unions.

(e)(1) Upon request of the Board, the Secretary of the Treasury shall invest and reinvest such portions of the annual operating fees deposited under subsection (d) as the Board determines are not needed for current operations.

(2) Such investments may be made only in interest bearing securities of the United States with maturities requested by the Board bearing interest at rates determined by the Secretary of the Treasury, taking into consideration current market yields on outstanding marketable obligations of the United States of comparable maturities.

(3) All income derived from such investments and reinvestments shall be deposited to the account of the Administration described in subsection (d).

§ 1756 § 106

Reports and examinations.—Federal credit unions shall be under the supervision of the Board, and shall make financial reports to it as and when it may require, but at least annually. Each Federal credit union shall be subject to examination by, and for this purpose shall make its books and records accessible to, any person designated by the Board.

§ 1757 § 107

Powers.—A Federal credit union shall have succession in its corporate name during its existence and shall have power—

(1) to make contracts;

(2) to sue and be sued;

(3) to adopt and use a common seal and alter the same at pleasure;

(4) to purchase, hold, and dispose of property necessary or incidental to its operations;

(5) to make loans, the maturities of which shall not exceed fifteen years except as otherwise provided herein, and extend lines of credit to its members, to other credit unions, and to credit union organizations and to participate with other credit unions, credit union organizations, or financial organizations in making loans to credit union members in accordance with the following:

(A) Loans to members shall be made in conformity with criteria established by the board of directors: Provided, That—

(i) a residential real estate loan on a one-to-four-family dwelling, including an

individual cooperative unit, that is or will be the principal residence of a credit union member, which is secured by a first lien upon such dwelling, and may have a maturity not exceeding thirty years or such other limits as shall be set by the National Credit Union Administration Board (except that a loan on an individual cooperative unit shall be adequately secured as defined by the Board), subject to the rules and regulations of the Board;

(ii) a loan to finance the purchase of a mobile home, which shall be secured by a first lien on such mobile home, to be used by the credit union member as his residence, a loan for the repair, alteration, or improvement of a residential dwelling which is the residence of a credit union member, or a second mortgage loan secured by a residential dwelling which is the residence of a credit union member, shall have a maturity not to exceed 15 years or any longer term which the Board may allow.

(iii) a loan secured by the insurance or guarantee of, or with advance commitment to purchase the loan by, the Federal Government, a State government or any agency of either may be made for the maturity and under the terms and conditions specified in the law under which such insurance, guarantee, or commitment is provided;

(iv) a loan or aggregate of loans to a director or member of the supervisory or credit committee of the credit union making the loan which exceeds \$20,000 plus pledged shares, be approved by the board of directors;

(v) loans to other members for which directors or members of the supervisory or credit committee act as guarantor or endorser be approved by the board of directors when such loans standing alone or when added to any outstanding loan or loans of the guarantor or endorser exceeds \$20,000;

(vi) the rate of interest may not exceed 15 per centum per annum on the unpaid balance inclusive of all finance charges, except that the Board may establish—

(I) after consultation with the appropriate committees of the Congress, the Department of Treasury, and the Federal financial institution regulatory agencies, an interest rate ceiling exceeding such 15 per centum per annum rate, for periods not to exceed 18 months, if it determines that money market interest rates have risen over the preceding six-month period and that prevailing interest rate levels threaten the safety and soundness of individual credit unions as evidenced by adverse trends in liquidity, capital, earnings, and growth; and

(II) a higher interest rate ceiling for Agent members of the Central Liquidity Facility in carrying out the provisions of title III for such periods as the Board may authorize,

(vii) the taking, receiving, reserving, or charging of a rate of interest greater than is allowed by this paragraph, when knowingly done, shall be deemed a forfeiture of the entire interest which the note, bill, or other evidence of debt carries with it, or which has been agreed to be paid thereon. If such greater rate of interest has been paid, the person by whom it has been paid, or his legal representatives, may recover back from the credit union taking or receiving the same, in an action in the nature of an action of debt, the entire amount of interest paid; but such action must be commenced within two years from the time the usurious collection was made;

(viii) a borrower may repay his loan, prior to maturity in whole or in part on any business day without penalty, except that on a first or second mortgage loan a Federal credit union may require that any partial prepayments

(I) be made on the date monthly installments are due and (II) be in the amount of that part of one or more monthly installments which would be applicable to principal;

(ix) loans shall be paid or amortized in accordance with rules and regulations prescribed by the Board after taking into account the needs or conditions of the borrowers, the amounts and duration of the loans, the interests of the members and the credit unions, and such other factors as the Board deems relevant;

(x) loans must be approved by the credit committee or a loan officer, but no loan may be made to any member if, upon the making of that loan, the member would be indebted to the Federal credit union upon loans made to him in an aggregate amount which would exceed 10 per centum of the credit union's unimpaired capital and surplus.

(B) A self-replenishing line of credit to a borrower may be established to a stated maximum amount on certain terms and conditions which may be different from the terms and conditions established for another borrower.

(C) Loans to other credit unions shall be approved by the board of directors.

(D) Loans to credit union organizations shall be approved by the board of directors and shall not exceed 1 per centum of the paid-in and unimpaired capital and surplus of the credit union. A credit union organization means any organization as determined by the Board, which is established primarily to serve the needs of its member credit unions, and whose business relates to the daily operations of the credit unions they serve.

(E) Participation loans with other credit unions, credit union organizations, or financial organizations shall be in accordance with written policies of the board of directors. Provided, That a credit union which originates a loan for which participation arrangements are made in accordance with this subsection shall retain an interest of at least 10 per centum of the face amount of the loan;

(6) To receive from its members, from other credit unions, from an officer, employee, or agent of those nonmember units of Federal, Indian Tribal, State, or local governments and political subdivisions thereof enumerated in section 207 of this Act and in the manner so prescribed, from the Central Liquidity Facility, and from nonmembers in the case of credit unions serving predominantly low-income members (as defined by the Board) payments, representing equity, on—

(A) shares which may be issued at varying dividend rates;

(B) share certificates which may be issued at varying dividend rates and maturities; and

(C) share draft accounts authorized under Section 205(f); subject to such terms, rates, and conditions as may be established by the board of directors, within limitations prescribed by the Board;

(7) To invest its funds (A) in loans exclusively to members; (B) in obligations of the United States of America, or securities fully guaranteed as to principal and interest thereby; (C) in accordance with rules and regulations prescribed by the Board, in loans to other credit unions in the total amount not exceeding 25 per centum of its paid-in and unimpaired capital and surplus; (D) in shares or accounts of savings and loan associations or mutual savings banks, the accounts of which are insured by the Federal Deposit Insurance Corporation; (E) in obligations issued by banks for cooperatives, Federal land banks, Federal intermediate credit banks, Federal home loan banks, the Federal Housing Finance Board, or any corporation designated in 31 USC 9101(3) as a wholly owned Government corporation; or in obligations, participations, or other instruments of or issued by, or fully guaranteed as to principal and interest by, the Federal National Mortgage Association or the Government National Mortgage Association; or in mortgages, obligations, or other securities which are or ever have been sold by the Federal Home Loan Mortgage Corporation pursuant to Section 305 or Section 306 of the Federal Home Loan Mortgage Corporation Act; or in obligations or other instruments or securities of the Student Loan Marketing Association; or in obligations, participations, securities, or other instruments of, or issued by, or fully guaranteed as to principal and interest by any other agency of the United States and a Federal credit union may issue and sell securities which are guaranteed pursuant to section 306(g) of the National Housing Act; (F) in participation certificates evidencing beneficial interests in obligations, or in the right to receive interest and principal collections therefrom, which obligations have been subjected by one or more Government agencies to a trust or trusts for which any executive department, agency, or

instrumentality of the United States (or the head thereof) has been named to act as trustee; (G) in shares or deposits of any central credit union in which such investments are specifically authorized by the board of directors of the Federal credit union making the investment; (H) in shares, share

certificates, or share deposits of federally insured credit unions; (I) in the shares, stocks, or obligations of any other organization, providing services which are associated with the routine operations of credit unions, up to 1 per centum of the total paid in and unimpaired capital and surplus of the credit union with the approval of the Board: Provided, however, That such authority does not include the power to acquire control directly or indirectly, of another financial institution, nor invest in shares, stocks or obligations of an insurance company, trade association, liquidity facility or any other similar organization, corporation, or association, except as otherwise expressly provided by this Act; (J) in the capital stock of the National Credit Union Central Liquidity Facility; and (K) investments in obligations of, or issued by, any State or political subdivision thereof (including any agency, corporation, or instrumentality of a State or political subdivision), except that no credit union may invest more than 10 per centum of its unimpaired capital and surplus in the obligations of any one issuer (exclusive of general obligations of the issuer);

(8) to make deposits in national banks and in State banks, trust companies, and mutual savings banks operating in accordance with the laws of the State in which the Federal credit union does business, or in banks or institutions the accounts of which are insured by the Federal Deposit Insurance Corporation or the Federal Savings and Loan Insurance Corporation, and for Federal credit unions or credit unions authorized by the Department of Defense operating suboffices on American military installations in foreign countries or trust territories of the United States to maintain demand deposit accounts in banks located in those countries or trust territories, subject to such regulations as may be issued by the Board and provided such banks are correspondents of banks described in this paragraph;

(9) to borrow in accordance with such rules and regulations as may be prescribed by the Board, from any source, in an aggregate amount not exceeding, except as authorized by the Board in carrying out the provisions of title III, 50 per centum of its paid-in and unimpaired capital and surplus: *Provided*, That any Federal credit union may discount with or sell to any Federal intermediate credit bank any eligible obligations up to the amount of its paid-in and unimpaired capital;

(10) to levy late charges, in accordance with the bylaws, for failure of members to meet promptly their obligations to the Federal credit union;

(11) to impress and enforce a lien upon the shares and dividends of any member, to the extent of any loan made to him and any dues or charges payable by him;

(12) in accordance with regulations prescribed by the Board –

(A) to sell, to persons in the field of membership, negotiable checks (including travelers checks), money orders, and other similar money transfer instruments (including international and domestic electronic fund transfers); and

(B) to cash checks and money orders and receive international and domestic electronic fund transfers for persons in the field of membership for a fee;

(13) in accordance with rules and regulations prescribed by the Board, to purchase, sell, pledge, or discount or otherwise receive or dispose of, in whole or in part, any eligible obligations (as defined by the Board) of its members and to purchase from any liquidating credit union notes made by individual members of the liquidating credit union at such prices as may be agreed upon by the board of directors of the liquidating credit union and the board of directors of the purchasing credit union, but no purchase may be made under authority of this paragraph if, upon the making of that purchase, the aggregate of the unpaid balances of notes purchased under authority of this paragraph would exceed 5 per centum of the unimpaired capital and surplus of the credit union;

- (14) to sell all or a part of its assets to another credit union, to purchase all or part of the assets of another credit union and to assume the liabilities of the selling credit union and those of its members subject to regulations of the Board;
- (15) to invest in securities that—
- (A) are offered and sold pursuant to section 4(5) of the Securities Act of 1933 (15 U.S.C. 77d(5)); or
- (B) are mortgage related securities (as that term is defined in section 3(a)(41) of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78c(a)(41)), subject to such regulations as the Board may prescribe, including regulations prescribing minimum size of the issue (at the time of initial distribution) or minimum aggregate sales prices, or both;
- (C) are small business related securities (as defined in section 3(a)(53) of the Securities Exchange Act of 1934), subject to such regulations as the Board may prescribe, including regulations prescribing the minimum size of the issue (at the time of the initial distribution), the minimum aggregate sales price, or both.
- (16) subject to such regulations as the Board may prescribe, to provide technical assistance to credit unions in Poland and Hungary; and
- (17) to exercise such incidental powers as shall be necessary or requisite to enable it to carry on effectively the business for which it is incorporated.

§ 1757a § 107A

Limitation on member business loans.—

(a) In general.—On and after the date of enactment of this section, no insured credit union may make any member business loan that would result in a total amount of such loans outstanding at that credit union at any one time equal to more than the lesser of—

- (1) 1.75 times the actual net worth of the credit union; or
- (2) 1.75 times the minimum net worth required under section 216(c)(1)(A) for a credit union to be well capitalized.

(b) Exceptions.—Subsection (a) does not apply in the case of—

- (1) an insured credit union chartered for the purpose of making, or that has a history of primarily making, member business loans to its members, as determined by the Board; or
- (2) an insured credit union that—

(A) serves predominantly low-income members, as defined by the Board; or

(B) is a community development financial institution, as defined in section 103 of the Community Development Banking and Financial Institutions Act of 1994.

(c) Definitions.—As used in this section—

(1) the term ‘member business loan’—

(A) means any loan, line of credit, or letter of credit, the proceeds of which will be used for a commercial, corporate or other business investment property or venture, or agricultural purpose; and

(B) does not include an extension of credit—

(i) that is fully secured by a lien on a 1- to 4-family dwelling that is the primary residence of a member;

(ii) that is fully secured by shares in the credit union making the extension of credit or deposits in other financial institutions;

(iii) that is described in subparagraph (A), if it was made to a borrower or an associated member that has a total of all such extensions of credit in an amount equal to less than \$50,000;

(iv) the repayment of which is fully insured or fully guaranteed by, or where there is an advance commitment to purchase in full by, any agency of the Federal Government or of a State, or any political subdivision thereof; or

(v) that is granted by a corporate credit union (as that term is defined by the Board) to another credit union.

(2) the term 'net worth'—

(A) with respect to any insured credit union, means the credit union's retained earnings balance, as determined under generally accepted accounting principles; and

(B) with respect to a credit union that serves predominantly low-income members, as defined by the Board, includes secondary capital accounts that are—

(i) uninsured; and

(ii) subordinate to all other claims against the credit union, including the claims of creditors, shareholders, and the Fund; and

(3) the term 'associated member' means any member having a shared ownership, investment, or other pecuniary interest in a business or commercial endeavor with the borrower.

(d) Effect on Existing Loans.—An insured credit union that has, on the date of enactment of this section, a total amount of outstanding member business loans that exceeds the amount permitted under subsection (a) shall, not later than 3 years after that date of enactment, reduce the total amount of outstanding member business loans to an amount that is not greater than the amount permitted under subsection (a).

(e) Consultation and Cooperation With State Credit Union Supervisors.—In implementing this section, the Board shall consult and seek to work cooperatively with State officials having jurisdiction over Statechartered insured credit unions.

§ 1758 § 108

Bylaws.—In order to simplify the organization of Federal credit unions the Board shall from time to time cause to be prepared a form of organization certificate and a form of bylaws, consistent with this chapter, which shall be used by Federal credit union incorporators, and shall be supplied to them on request. At the time of presenting the organization certificate the incorporators shall also submit proposed bylaws to the Board for its approval.

§ 1759 § 109

Membership.—(a) In general.—Subject to subsection (b), Federal credit union membership shall consist of the incorporators and such other persons and incorporated and unincorporated organizations, to the extent permitted by rules and regulations prescribed by the Board, as may be elected to membership and as such shall each subscribe to at least one share of its stock and pay the initial installment thereon and a uniform entrance fee if required by the board of directors. Shares may be issued in joint tenancy with right of survivorship with any persons designated by the credit union member, but no joint tenant shall be permitted to vote, obtain loans, or hold office, unless he is within the field of membership and is a qualified member.

(b) Membership field.—Subject to the other provisions of this section, the membership of any Federal credit union shall be limited to the membership described in one of the following categories:

(1) Single common-bond credit union.— One group that has a common bond of occupation or association.

(2) Multiple common-bond credit union.—More than one group—

(A) each of which has (within the group) a common bond of occupation or association; and

(B) the number of members, each of which (at the time the group is first included within the field of membership of a credit union described in this paragraph) does not exceed any numerical limitation applicable under subsection (d).

(3) Community credit union.—

Persons or organizations within a well-defined local community, neighborhood, or rural district.

(c) Exceptions.—

(1) Grandfathered members and groups.—

(A) In general.—Notwithstanding subsection (b)—

(i) any person or organization that is a member of any Federal credit union as of the date of enactment of the Credit Union Membership Access Act may remain a member of the credit union after that date of enactment; and

(ii) a member of any group whose members constituted a portion of the membership of any Federal credit union as of that date of enactment shall continue to be eligible to become a member of that credit union, by virtue of membership in that group, after that date of enactment.

(B) Successors.—If the common bond of any group referred to in subparagraph

(A) is defined by any particular organization or business entity, subparagraph (A) shall continue to apply with respect to any successor to the organization or entity.

(2) Exception for underserved areas.— Notwithstanding subsection (b), in the case of a Federal credit union, the field of membership category of which is described in subsection (b)(2), the Board may allow the membership of the credit union to include any person or organization within a local community, neighborhood, or rural district if—

(A) the Board determines that the local community, neighborhood, or rural district—

(i) is an ‘investment area’, as defined in section 103(16) of the Community Development Banking and Financial Institutions Act of 1994, and meets such additional requirements as the Board may impose; and

(ii) is underserved, based on data of the Board and the Federal banking agencies (as defined in section 3 of the Federal Deposit Insurance Act), by other depository institutions (as defined in section 19(b)(1)(A) of the Federal Reserve Act); and

(B) the credit union establishes and maintains an office or facility in the local community, neighborhood, or rural district at which credit union services are available.

(d) Multiple Common-Bond Credit Union Group Requirements.—

(1) Numerical limitation.—Except as provided in paragraph (2), only a group with fewer than 3,000 members shall be eligible to be included in the field of membership category of a credit union described in subsection (b)(2).

(2) Exceptions.—In the case of any Federal credit union, the field of membership category of which is described in subsection (b)(2), the numerical limitation in paragraph (1) of this subsection shall not apply with respect to—

(A) any group that the Board determines, in writing and in accordance with the guidelines and regulations issued under paragraph (3), could not feasibly or reasonably establish a new single common-bond credit union, the field of membership category of which is described in subsection (b)(1) because—

(i) the group lacks sufficient volunteer and other resources to support the efficient and effective operation of a credit union;

(ii) the group does not meet the criteria that the Board has determined to be important for the likelihood of success in establishing and managing a new credit union, including demographic characteristics such as geographical location of members, diversity of ages and income levels, and other factors that may affect the financial viability and stability of a credit union; or

(iii) the group would be unlikely to operate a safe and sound credit union;

(B) any group transferred from another credit union—

(i) in connection with a merger or consolidation recommended by the Board or any appropriate State credit union supervisor based on safety and soundness concerns with respect to that other credit union; or

(ii) by the Board in the Board's capacity as conservator or liquidating agent with respect to that other credit union; or

(C) any group transferred in connection with a voluntary merger, having received conditional approval by the Administration of the merger application prior to October 25, 1996, but not having consummated the merger prior to October 25, 1996, if the merger is consummated not later than 180 days after the date of enactment of the Credit Union Membership Access Act.

(3) Regulations and guidelines.—The Board shall issue guidelines or regulations, after notice and opportunity for comment, setting forth the criteria that the Board will apply in determining under this subsection whether or not an additional group may be included within the field of membership category of an existing credit union described in subsection (b)(2).

(e) Additional Membership Eligibility Provisions.—

(1) Membership eligibility limited to immediate family or household members.— No individual shall be eligible for membership in a credit union on the basis of the relationship of the individual to another person who is eligible for membership in the credit union, unless the individual is a member of the immediate family or household (as those terms are defined by the Board, by regulation) of the other person.

(2) Retention of membership.—

Except as provided in section 118, once a person becomes a member of a credit union in accordance with this title, that person or organization may remain a member of that credit union until the person or organization chooses to withdraw from the membership of the credit union.

(f) Criteria for Approval of Expansion of Multiple Common-Bond Credit Unions.—

(1) In general.—The Board shall—

(A) encourage the formation of separately chartered credit unions instead of approving an application to include an additional group within the field of membership of an existing credit union whenever practicable and consistent with reasonable standards for the safe and sound operation of the credit union; and

(B) if the formation of a separate credit union by the group is not practicable or consistent with the standards referred to in subparagraph (A), require the inclusion of the group in the field of membership of a credit union that is within reasonable proximity to the location of the group whenever practicable and consistent with reasonable standards for the safe and sound operation of the credit union.

(2) Approval criteria.—The Board may not approve any application by a Federal credit union, the field of membership category of which is described in subsection (b)(2) to include any additional group within the field of membership of the credit union (or an application by a Federal credit union described in subsection (b)(1) to include an additional group and become a credit union described in subsection (b)(2)), unless the Board determines, in writing, that—

(A) the credit union has not engaged in any unsafe or unsound practice (as defined in section 206(b)) that is material during the year period preceding the date of filing of the application;

(B) the credit union is adequately capitalized;

(C) the credit union has the administrative capability to serve the proposed membership group and the financial resources to meet the need for additional staff and assets to serve the new membership group;

(D) any potential harm that the expansion of the field of membership of the credit union may have on any other insured credit union and its members is clearly outweighed in the public interest by the probable beneficial effect of the expansion in meeting the convenience and needs of the members of the group proposed to be included in the field of membership; and

(E) the credit union has met such additional requirements as the Board may prescribe, by regulation.

(g) Regulations Required for Community Credit Unions.—

(1) Definition of well-defined local community, neighborhood, or rural district.— The Board shall prescribe, by regulation, a definition for the term ‘welldefined local community, neighborhood, or rural district’ for purposes of—

(A) making any determination with regard to the field of membership of a credit union described in subsection (b)(3); and

(B) establishing the criteria applicable with respect to any such determination.

(2) Scope of application.—The definition prescribed by the Board under paragraph (1) shall apply with respect to any application to form a new credit union, or to alter or expand the field of membership of an existing credit union, that is filed with the Board after the date of enactment of the Credit Union Membership Access Act.

§ 1760 § 110

Members’ meetings.—The fiscal year of all Federal credit unions shall end December 31. The annual meeting of each Federal credit union shall be held at such place as its bylaws shall prescribe. Special meetings may be held in the manner indicated in the bylaws. No member shall be entitled to vote by proxy, but a member other than a natural person may vote through an agent designated for the purpose. Irrespective of the number of shares held, no member shall have more than one vote.

§ 1761 § 111

Management; board of directors; credit committee; supervisory committee; compensation.—

(a) The management of a Federal credit union shall be by a board of directors, a supervisory committee, and where the bylaws so provide, a credit committee. The board shall consist of an odd number of directors, at least five in number, to be elected annually by and from the members as the bylaws provide. Any vacancy occurring on the board shall be filled until the next annual election by appointment by the remainder of the directors.

(b) The supervisory committee shall be appointed by the board of directors and shall consist of not less than three members nor more than five members, one of whom may be a director other than the compensated officer

of the board. A record of the names and addresses of the executive officers, members of the supervisory committee, credit committee, and loan officers, shall be filed with the Administration within ten days after their election or appointment.

(c) No member of the board or of any other committee shall, as such, be compensated, except that reasonable health, accident, similar insurance protection, and the reimbursement of reasonable expenses incurred in the execution of the duties of the position shall not be considered compensation.

§ 1761a § 112

Executive officers; general manager.— At their first meeting after the annual meeting of the members, the directors shall elect from their number the board officers specified in the bylaws. Only one board officer may be compensated as an officer of the board and the bylaws shall specify such position as well as the specific duties of each of

the board officers. The board shall elect from their number a financial officer who shall give adequate fidelity coverage in accordance with section 113(2) of this Act.

§ 1761b § 113

Board of directors; meetings; powers and duties; executive committee; membership officers; membership applications.—The board of directors shall meet at least once a month and shall have the general direction and control of the affairs of the Federal credit union. Minutes of all meetings shall be kept. Among other things, the board of directors shall—

- (1) act upon applications for membership or appoint membership officers from among the members of the credit union, other than the board member paid as an officer, the financial board officer, any assistant to the paid officer of the board or to the financial officer, or any loan officer;
- (2) provide adequate fidelity coverage for officers and employees having custody of or handling funds according to regulations issued by the Board;
- (3) fill vacancies on the board of directors until successors elected at the next annual meeting have qualified;
- (4) if the bylaws provide for an elected credit committee, fill vacancies on the credit committee until successors elected at the next annual meeting have qualified;
- (5) appoint the members of the supervisory committee and, if the bylaws so provide, appoint the members of the credit committee;
- (6) have charge of investments including the right to designate an investment committee of not less than two to act on its behalf;
- (7) determine the maximum number of shares, share certificates, and share draft accounts, and the classes of shares, share certificates, and share draft accounts;
- (8) subject to any limitations of this subchapter, determine the interest rates on loans, the security, and the maximum amount which may be loaned and provided in lines of credit;
- (9) authorize interest refunds to members of record at the close of business on the last day of any dividend period from income earned and received in proportion to the interest paid by them during that dividend period;
- (10) if the bylaws so provide, appoint one or more loan officers and delegate to these officers the power to approve or disapprove loans, lines of credit, or advances from lines of credit;
- (11) establish the par value of the share;
- (12) subject to the limitations of this title and the bylaws of the credit union, provide for the hiring and compensation of officers and employees;
- (13) if the bylaws so provide, appoint an executive committee of not less than three directors to act on its behalf and any other committees to which it can delegate specific functions;
- (14) prescribe conditions and limitations for any committee which it appoints;
- (15) review at each monthly meeting a list of approved or pending applications for membership received since the previous monthly meeting together with such other related information as it or the bylaws require;
- (16) provide for the furnishing of the written reasons for any denial of a membership application to the applicant upon the written request of the applicant;
- (17) in the absence of a credit committee, and upon the written request of a member, review a loan application denied by a loan officer;
- (18) declare the dividend rate to be paid on shares, share certificates, and share draft accounts pursuant to the terms and conditions of section 117;
- (19) establish and maintain a system of internal controls consistent with the regulations of the Board;

(20) establish lending policies; and

(21) do all other things that are necessary and proper to carry out all the purpose and powers of the Federal credit union, subject to regulations issued by the Board.

§ 1761c § 114

Credit committee; meetings; powers and duties; loans and lines of credit; security.—

(a) If the bylaws provide for a credit committee, then pursuant to the provisions of the bylaws, the board of directors may appoint or the members may elect a credit committee which shall consist of an odd number of members of the credit union, but which shall not include more than one loan officer. The method used shall be set forth in the bylaws.

The credit committee shall hold such meetings as the business of the Federal credit union may require, not less frequently than once a month, to consider applications for loans or lines of credit. Reasonable notice of such

meetings shall be given to all members of the committee. Except for those loans or lines of credit required to be approved by the board of directors in section 107(5) of this Act, approval of an application shall be by majority of the committee who are present at the meeting at which it is considered provided that a majority of the full committee is present. The credit committee may appoint and delegate to loan officers the authority to approve applications.

(b) If the bylaws provide for a credit committee, all applications not approved by the loan officer shall be reviewed by the credit committee, and the approval of a majority of the members who are present at the meeting when such review is undertaken shall be required to reverse the loan officer's decision provided a majority of the full committee is present. If there is not a credit committee, a member shall have the right upon written request of review by the board of directors of a loan application which has been denied. No individual shall have authority to disburse funds of the Federal credit union with respect to any loan or line of credit for which the application has been approved by him in his capacity as a loan officer.

§ 1761d § 115

Supervisory committee; powers and duties; suspension of members; passbook.— The supervisory committee shall make or cause to be made an annual audit and shall submit a report of that audit to the board of directors and a summary of the report to the members at the next annual meeting of the credit union; shall make or cause to be made such supplementary audits

as it deems necessary or as may be ordered by the Board, and submit reports of the supplementary audits to the board of directors; may by a unanimous vote suspend any officer of the credit union or any member of the credit committee or of the board of directors, until the next members' meeting, which shall be held not less than seven nor more than fourteen days after any such suspension, at which meeting any such suspension shall be acted upon by the members; and may call by a majority vote a special meeting of the members to consider any violation of this chapter, the charter, or the bylaws, or any practice of the credit union deemed by the supervisory committee to be unsafe or unauthorized. Any member of the supervisory committee may be suspended by a majority vote of the board of directors. The members shall decide, at a meeting held not less than seven nor more than fourteen days after any such suspension, whether the suspended committee member shall be removed from or restored to the supervisory committee.

The supervisory committee shall cause the passbooks and accounts of the members to be verified with the records of the treasurer from time to time, and not less frequently than

once every two years. As used in this section, the term “passbook” shall include any book, statement of account, or other record approved by the Board for use by Federal credit unions.

§ 1762 § 116

Repealed by P.L. 105–219, see section 216.

§ 1763 § 117

Dividends.—At such intervals as the board of directors may authorize, and after provision for required reserves, the board of directors may declare a dividend to be paid at different rates on different types of shares, at different rates and maturity dates in the case of share certificates, and at different rates on different types of share draft accounts.

Dividends credited may be accrued on various types of shares, share certificates, and share draft accounts as authorized by the board of directors. If the par value of a share exceeds \$5, dividends shall be paid on all funds in the regular share account once a full share has been purchased.

§ 1764 § 118

Expulsion and withdrawal.—

(a) Except as provided in subsection (b) of this section, a member may be expelled by a two-thirds vote of the members of a Federal credit union present at a special meeting called for the purpose, but only after opportunity has been given him to be heard.

(b) The board of directors of a Federal credit union may, by majority vote of a quorum of directors, adopt and enforce a policy with respect to expulsion from membership based on nonparticipation by a member in the affairs of the credit union. In establishing its policy, the board should consider a member’s failure to vote in annual credit union elections or failure to purchase shares from, obtain a loan from, or lend to the Federal credit union. If such a policy is adopted, written notice of the policy as adopted and the effective date of such policy shall be mailed to each member of the credit union at the member’s current address appearing on the records of the credit union not less than 30 days prior to the effective date of such policy. In addition, each new member shall be provided written notice of any such policy prior to or upon applying for membership.

(c) Withdrawal or expulsion of a member pursuant to either subsection (a) or (b) of this section shall not operate to relieve him from liability to the Federal credit union. The amount to be paid a withdrawing or expelled member by a Federal credit union shall be determined and paid in a manner specified in the bylaws.

§ 1765 § 119

Minors.—Shares may be issued in the name of a minor or in trust, subject to such conditions as may be prescribed by the bylaws. When shares are issued in trust, the name of the beneficiary shall be disclosed to the Federal credit union.

§ 1766 § 120

Powers of the Board and Administration personnel.—

(a) The Board may prescribe rules and regulations for the administration of this chapter (including, but not by way of limitation, the merger, consolidation, and dissolution of corporations organized under this chapter). Any central credit union chartered by the Board shall be subject to such rules, regulations, and orders as the Board deems appropriate and, except as

otherwise specifically provided in such rules, regulations, or orders, shall be vested with or subject to the same rights, privileges, duties, restrictions, penalties, liabilities, conditions, and limitations that would apply to all Federal credit unions under this Act.

(b)(1) The Board may suspend or revoke the charter of any Federal credit union, or place the same in involuntary liquidation and appoint a liquidating agent therefor, upon its finding that the organization is bankrupt or insolvent, or has violated any of the provisions of its charter, its bylaws, this chapter, or any regulations issued thereunder.

(2) The Board, through such persons as it shall designate, may examine any Federal credit union in voluntary liquidation and, upon its finding that such voluntary liquidation is not being conducted in an orderly or efficient manner or in the best interests of its members, may terminate such voluntary liquidation and place such organization in involuntary liquidation and appoint a liquidating agent therefor.

(3) Such liquidating agent shall have power and authority, subject to the control and supervision of the Board and under such rules and regulations as the Board may prescribe,

(A) to receive and take possession of the books, records, assets, and property of every description of the Federal credit union in liquidation, to sell, enforce collection of, and liquidate all such assets and property, to compound all bad or doubtful debts, and to sue in its own name or in the name of the Federal credit union in liquidation, and defend such actions as may be brought against it as liquidating agent or against the Federal credit union;

(B) to receive, examine, and pass upon all claims against the Federal credit union in liquidation, including claims of members on member accounts;

(C) to make distribution and payment to creditors and members as their interests may appear; and

(D) to execute such documents and papers and to do such other acts and things which it may deem necessary or desirable to discharge its duties hereunder.

(4) Subject to the control and supervision of the Board and under such rules and regulations as the Board may prescribe, the liquidating agent of a Federal credit union in involuntary liquidation shall

(A) cause notice to be given to creditors and members to present their claims and make legal proof thereof, which notice shall be published once a week in each of three successive weeks in a newspaper of general circulation in each county in which the Federal credit union in liquidation maintained an office or branch for the transaction of business on the date it ceased unrestricted operations; except that whenever the aggregate book value of the assets and property of a Federal credit union in involuntary liquidation is less than \$1,000, unless the Board shall find that its books and records do not contain a true and accurate record of its liabilities, it shall declare such Federal credit union in liquidation to be a "no publication" liquidation, and publication of notice to creditors and members shall not be required in such case;

(B) from time to time make a ratable dividend on all such claims as may have been proved to its satisfaction or adjudicated in a court of competent jurisdiction and, after the assets of such organizations have been liquidated, make further dividends on all claims previously proved or adjudicated, and it may accept in lieu of a formal proof of claim on behalf of any creditor or member the statement of any amount due to such creditor or member as shown on the books and records of the credit union; but all claims not filed before payment of the final dividend shall be barred and claims rejected or disallowed by the liquidating agent shall be likewise barred unless suit be instituted thereon within three months after notice of rejection or disallowance; and

(C) in a "no publication" liquidation, determine from all sources available to it, and within the limits of available funds of the Federal credit union, the amounts due to creditors and

members, and after sixty days shall have elapsed from the date of its appointment distribute the funds of the Federal credit union to creditors and members ratably and as their interests may appear.

(5) Upon certification by the liquidating agent in the case of an involuntary liquidation, and upon such proof as shall be satisfactory to the Board in the case of a voluntary liquidation, that distribution has been made and that liquidation has been completed, as provided herein, the Board shall cancel the charter of such Federal credit union; but the corporate existence of the Federal credit union shall continue for a period of three years from the date of such cancellation of its charter, during which period the liquidating agent, or its duly appointed successor, or such persons as the Board shall designate, may act on behalf of the Federal credit union for the purpose of paying, satisfying, and discharging any existing liabilities or obligations, collecting and distributing its assets, and doing all other acts required to adjust and wind up its business and affairs, and it may sue and be sued in its corporate name.

(c) After the expiration of five years from the date of cancellation of the charter of a Federal credit union the Board may, in its discretion, destroy any or all books and records of such Federal credit union in its possession or under its control.

(d) The Board is authorized and empowered to execute any and all functions and perform any and all duties vested in it hereby, through such persons as it shall designate or employ; and it may delegate to any person or persons, including any institution operating under the general supervision of the Administration, the performance and discharge of any authority, power, or function vested in it by this chapter.

(e) All books and records of Federal credit unions shall be kept and reports shall be made in accordance with forms approved by the Board.

(f)(1) The Board is authorized to make investigations and to conduct researches and studies of the problems of persons of small means in obtaining credit at reasonable rates of interest, and of the methods and benefits of cooperative saving and lending among such persons. It is further authorized to make reports of such investigations and to publish and disseminate the same.

(2)(A) The Board is authorized to conduct directly, or to make grants to or contracts with colleges or universities, State or local educational agencies, or other appropriate public or private nonprofit organizations to conduct programs for the training of persons engaged, or preparing to engage, in the operation of credit unions, and in related consumer counseling programs, serving the poor. It is authorized to establish a program of experimental, developmental, demonstration, and pilot projects, either directly or by grants to public or private non profit organizations, including credit unions, or by contracts with such organizations or other private organizations, designed to promote more effective operation of credit unions, and related consumer counseling programs, serving the poor.

(B) In carrying out its authority under this paragraph, the Board shall consult with officials of the Office of Economic Opportunity and other appropriate Federal agencies responsible for the administration of projects or programs concerned with problems of the poor. The development and operation of programs and projects under this paragraph shall involve maximum feasible participation of residents of the areas and members of the groups served by such programs and projects, with community action agencies established under the provisions of the Economic Opportunity Act of 1964 serving, to the extent feasible, as the means through which such participation is achieved.

(C) In order to carry out the purposes of this paragraph, there is authorized to be appropriated, as a supplement to any funds that may be expended by the Board pursuant to sections 105 and 106 of this Act for such purposes, not to exceed \$300,000 for the

fiscal year ending June 30, 1970, and not to exceed \$1,000,000 for the fiscal year ending June 30, 1971.

(g) Any officer or employee of the Administration is authorized, when designated for the purpose by the Board, to administer oaths and affirmations and to take affidavits and depositions touching upon any matter within the jurisdiction of the Administration.

(h) The Board is authorized, empowered, and directed to require that every person appointed or elected by any Federal credit union to any position requiring the receipt, payment, or custody of money or other personal property owned by a Federal credit union, or in its custody or control as collateral or otherwise, give bond in a corporate surety company holding a certificate of authority from the Secretary of the Treasury under chapter 93 of title 31, United States Code, as an acceptable surety on Federal Bonds. Any such bond or bonds shall be in a form approved by the Board or with a view to providing surety coverage to the Federal credit union with reference to loss by reason of acts of fraud or dishonesty including forgery, theft, embezzlement, wrongful abstraction, or misapplication on the part of the person, directly or through connivance with others, and such other surety coverages as the Board may determine to be reasonably appropriate or as elsewhere required by this chapter. Any such bond or bonds shall be in such an amount in relation to the money or other personal property involved or in relation to the assets of the Federal credit union as the Board may from time to time prescribe by regulation for the purpose of requiring reasonable coverage. In lieu of individual bonds the Board may approve the use of a form of schedule or blanket bond which covers all of the officers and employees of a Federal credit union whose duties include the receipt, payment, or custody of money or other personal property for or on behalf of the Federal credit union. The Board may also approve the use of a form of excess coverage bond whereby a Federal credit union may obtain an amount of coverage in excess of the basic surety coverage.

(i) in addition to the authority conferred upon it by other sections of this Act, the Board is authorized in carrying out its functions under this Act—

(1) to appoint such personnel as may be necessary to enable the Administration to carry out its functions;

(2) to expend such funds, enter into such contracts with public and private organizations and persons, make such payments in advance or by way of reimbursement, acquire and dispose of, by lease or purchase, real or personal property, without regard to the provisions of any other law applicable to executive or independent agencies of the United States, and perform such other functions or acts as it may deem necessary or appropriate to carry out the provisions of this Act, in accordance with the rules and regulations or policies established by the Board not inconsistent with this Act.

(3) to pay stipends, including allowances for travel to and from the place of residence, to any individual to study in a program assisted under this Act upon a determination by the Board that assistance to such individual in such studies will be in furtherance of the purposes of this Act.

(j) Staff.—

(1) Appointment and compensation.— The Board shall fix the compensation and number of, and appoint and direct, employees of the Board. Rates of basic pay for employees of the Board may be set and adjusted by the Board without regard to the provisions of chapter 51 or subchapter III of chapter 53 of title 5, United States Code.

(2) Additional compensation and benefits.—The Board may provide additional compensation and benefits to employees of the Board if the same type of compensation or benefits are then being provided by any other Federal bank regulatory agency or, if not then being provided, could be provided by such an agency under applicable provisions of law, rule, or regulation. In setting and adjusting the total amount of compensation and

benefits for employees of the Board, the Board shall seek to maintain comparability with other Federal bank regulatory agencies.

(3) Funding.—The salaries and expenses of the Board and employees of the Board shall be paid from fees and assessments (including income earned on insurance deposits) levied on insured credit unions under this Act.

§ 1767 § 121

Fiscal agents and depositories.—

(a) Each Federal credit union organized under this chapter, when requested by the Secretary of the Treasury, shall act as fiscal agent of the United States and shall perform such services as the Secretary of the Treasury may require

in connection with the collection of taxes and other obligations due the United States and the lending, borrowing, and repayment of money by the United States, including the issue, sale, redemption, or repurchase of bonds, notes, Treasury certificates of indebtedness, or other obligations of the United States; and to facilitate such purposes the Board shall furnish to the Secretary of the Treasury from time to time the names and addresses of all Federal credit unions with such other available information concerning them as may be requested by the Secretary of the Treasury. Any Federal credit union organized under this chapter, when designated for that purpose by the Secretary of the Treasury, shall be a depository of public money, except receipts from customs, under such regulations as may be prescribed by the Secretary of the Treasury.

(b) Any Federal credit union, upon the deposit with it of any funds by the Federal Government, an Indian tribe, or any State or local government or political subdivision thereof as otherwise authorized by this Act, is authorized to pledge any of its assets securing the payment of the funds so deposited.

§ 1768 § 122

Taxation.—The Federal credit unions organized hereunder, their property, their franchises, capital, reserves, surpluses, and other funds, and their income shall be exempt from all taxation now or hereafter imposed by the United States or by any State, Territorial, or local taxing authority; except that any real property and any tangible personal property of such Federal credit unions shall be subject to Federal, State, Territorial, and local taxation to the same extent as other similar property is taxed. Nothing herein contained shall prevent holdings in any Federal credit union organized hereunder from being included in the valuation of the personal property of the owners or holders thereof in assessing taxes imposed by authority of the

State or political subdivision thereof in which the Federal credit union is located; but the duty or burden of collecting or enforcing the payment of such a tax shall not be imposed upon any such Federal credit union and the tax shall not exceed the rate of taxes imposed upon holdings in domestic credit unions.

§ 1769 § 123

Separability of provisions; right to alter, amend, or repeal chapter.—

(a) If any provision of this chapter, or the application thereof to any person or circumstance, is held invalid, the remainder of the chapter, and the application of such provision to other persons or circumstances, shall not be affected thereby.

(b) The right to alter, amend, or repeal this chapter or any part thereof, or any charter issued pursuant to the provisions of this chapter, is expressly reserved.

§ 1770 § 124

Allotment of space in Federal buildings or Federal land.—Notwithstanding any other provision of law, upon application by any credit union organized under State law or by any Federal credit union organized in accordance with the terms of this chapter, which application shall be addressed to the officer or agency of the United States charged with the allotment of space on lands reserved for the use of, and under the exclusive or concurrent jurisdiction of, the United States or in the Federal buildings in the community or district in which such credit union does business, such officer or agency may in his or its discretion lease land or allot space to such credit union without charge for rent or services if at least 95 percent of the membership of the credit union to be served by the allotment of space or the facility built on the lease land is composed of persons who either are presently Federal employees or were Federal employees at the time of admission into the credit union, and members of their families, and if space is available. For the purpose of this section, the term “services” includes, but is not limited to, the providing of lighting, heating, cooling, electricity, office furniture, office machines and equipment, telephone service (including installation of lines and equipment and other expenses associated with telephone service), and security systems (including installation of and other expenses associated with security systems). Where there is an agreement for the payment of costs associated with the provision of space or services, nothing in title 31, United States Code, or any other provision of law, shall be construed to prohibit or restrict payment by reimbursement to the miscellaneous receipts or other appropriate account of the Treasury.

§ 1771 § 125

Conversion from Federal to State credit union and from State to Federal credit union.—

(a) A Federal credit union may be converted into a State credit union under the laws of any State, the District of Columbia, the several Territories and possessions of the United States, the Panama Canal Zone, or the Commonwealth of Puerto Rico, by complying with the following requirements:

(1) The proposition for such conversion shall first be approved, and a date set for a vote thereon by the members (either at a meeting to be held on such date or by written ballot to be filed on or before such date), by a majority of the directors of the Federal credit union. Written notice of the proposition and of the date set for the vote shall then be delivered in person to each member, or mailed to each member at the address for such member appearing on the records of the credit union, not more than thirty nor less than seven days prior to such date. Approval of the proposition for conversion shall be by the affirmative vote of a majority of the members of the credit union who vote on the proposal.

The written notice of the proposition shall in bold face type state that the issue will be decided by a majority of the members who vote.

(2) A statement of the results of the vote, verified by the affidavits of the president or vice president and the secretary, shall be filed with the Administration within ten days after the vote is taken.

(3) Promptly after the vote is taken and in no event later than ninety days thereafter, if the proposition for conversion was approved by such vote, the credit union shall take such action as may be necessary under the applicable State law to make it a State credit union, and within ten days after receipt of the State credit union charter there shall be filed with the Administration a copy of the charter thus issued. Upon such filing the credit union shall cease to be a Federal credit union.

(4) Upon ceasing to be a Federal credit union, such credit union shall no longer be subject to any of the provisions of this chapter.

The successor State credit union shall be vested with all of the assets and shall continue responsible for all of the obligations of the Federal credit union to the same extent as though the conversion had not taken place.

(b)(1) A State credit union, organized under the laws of any State, the District of Columbia, the several Territories and possessions of the United States, the Panama Canal Zone, or the Commonwealth of Puerto Rico, may be converted into a Federal credit union by

(A) complying with all State requirements requisite to enabling it to convert to a Federal credit union or to cease being a State credit union,

(B) filing with the Administration proof of such compliance, satisfactory to the Board, and

(C) filing with the Administration an organization certificate as required by this chapter.

(2) When the Board has been satisfied that all of such requirements, and all other requirements of this chapter, have been complied with, the Board shall approve the organization certificate. Upon such approval, the State credit union shall become a Federal credit union as of the date it ceases to be a State credit union. The Federal credit union shall be vested with all of the assets and shall continue responsible for all of the obligations of the State credit union to the same extent as though the conversion had not taken place.

§ 1772 § 126

Territorial application of chapter.— The provisions of this chapter shall apply to the several States, the District of Columbia, the several Territories, including the trust territories, and possessions of the United States, the Panama Canal Zone, and the Commonwealth of Puerto Rico.

§ 1772a § 127

Gifts; acceptance of conditional gifts; deposit.—The Board is authorized to accept gifts of money made unconditionally by will or otherwise for the carrying out of any of the functions under this chapter. A conditional gift of money made by will or otherwise for such purposes may be accepted and used in accordance with its conditions, but no such gift shall be accepted which is conditioned upon any expenditure not to be met therefrom or from income thereof unless the Board determines that supplementation of such gift from the fees it may expend pursuant to sections 1755 and 1756 of this title or from any funds appropriated pursuant to section 1766(f)(2)(C) of this title for the purpose of making such expenditure will not adversely affect the sound administration of this chapter. Any such gift shall be deposited in the Treasury of the United States for the account of the Administration and may be expended in accordance with section 1755 or as provided in the preceding sentence.

§ 1772b § 128

Apportionment.—Notwithstanding any other provision of law, funds received by the Board pursuant to any method provided by this Act, and interest, dividend, or other income thereon, shall not be subject to apportionment for the purpose of chapter 15 of title 31, United States Code, or under any other authority.

§ 1772c § 129

Trust Fund.—Notwithstanding any other provision of law, all moneys of the Board shall be treated as trust funds for the purpose of section 256(a)(2) of the Balanced Budget and Emergency Deficit Control Act of 1985. This section is effective for fiscal year 1986 and every fiscal year thereafter.

§ 1772c-1 § 130

Community Development Revolving Loan Fund for Credit Unions.

(a) In General.—The Board may exercise the authority granted to it by the Community Development Credit Union Revolving Loan Fund Transfer Act, including any additional appropriation made or earnings accrued, subject only to this section and to regulations prescribed by the Board.

(b) Investment.—The Board may invest any idle Fund moneys in United States Treasury securities. Any interest accrued such securities shall become a part of the Fund.

(c) Loans.—The Board may require that any loans made from the Fund be matched by increased shares in the borrower credit union.

(d) Interest.—Interest earned by the Fund may be allocated by the Board for technical assistance to community development credit unions, subject to an appropriations Act.

(e) Definitions.—As used in this section, the term 'Fund' means the Community Development Credit Union Revolving Loan Fund.

§ 1772d § 131

Forfeiture of Organization Certificate for Money Laundering or Case Transaction Reporting Offenses.—

(a) Forfeiture of Franchise for Money Laundering or Cash Transaction Reporting Offenses.—

(1) Conviction of Title 18 offenses.—

(A) Duty to notify.—If a credit union has been convicted of any criminal offense under section 1956 or 1957 of Title 18, United States Code, the Attorney General shall provide to the Board a written notification of the conviction and shall include a certified copy of the order of conviction from the court rendering the decision.

(B) Notice of termination: pretermination hearing.—After receiving writing notification from the Attorney General of such a conviction, the Board shall issue to such credit union a notice of its intention to terminate all rights, privileges, and franchises of the credit union and schedule a pretermination hearing.

(2) Conviction of Title 31 offenses.— If a credit union is convicted of any criminal offense, under section 5322 or 5324 of title 31, United States Code, after receiving written notification from the Attorney General, the Board may issue to such credit union a notice of its intention to terminate all rights, privileges, and franchises of the credit union and schedule a pretermination hearing.

(3) Judicial review.—Section 206(j) shall apply to any proceeding under this section.

(b) Factors to be considered.—In determining whether a franchise shall be forfeited under subsection (a), the Board shall take into account the following factors:

(1) The extent to which directors, committee members, or senior executive officers (as defined by the Board in regulations which the Board shall prescribe) of the credit union knew of, or were involved in, the commission of the money laundering offense of which the credit union was found guilty.

(2) The extent to which the offense occurred despite the existence of policies and procedures within the credit union which were designed to prevent the occurrence of any such offense.

(3) The extent to which the credit union has fully cooperated with law enforcement authorities with respect to the investigation of the money laundering offense of which the credit union was found guilty.

(4) The extent to which the credit union has implemented additional internal controls (since the commission of the offense of which the credit union was found guilty) to prevent the occurrence of any other money laundering offense.

(5) The extent to which the interest of the local community in having adequate deposit and credit services available would be threatened by the forfeiture of the franchise.

(c) Successor liability.—This section shall not apply to a successor to the interests of, or a person who acquires, a credit union that violated a provision of law described in subsection (a), if the successor succeeds to the interests of the violator, or the acquisition is made, in good faith and not for purposes of evading this section or regulations prescribed under this section.

Title II—Share Insurance

§ 1781 § 201

Insurance of member accounts.—

(a) The Board, as hereinafter provided, shall insure the member accounts of all Federal credit unions and it may insure the member accounts of (1) credit unions organized and operated according to the laws of any State, the District of Columbia, the several territories, including the trust territories, and possessions of the United States, the Panama Canal Zone, or the Commonwealth of Puerto Rico, and (2) credit unions organized and operating under the jurisdiction of the Department of Defense if such credit unions are operating in compliance with the requirements of title I of this Act and regulations issued thereunder.

(b) Application for insurance of member accounts shall be made immediately by each Federal credit union and may be made at any time by a State credit union or a credit union operating under the jurisdiction of the Department of Defense. Applications for such insurance shall be in such form as the Board shall provide and shall contain an agreement by the applicant—

(1) to pay the reasonable cost of such examinations as the Board may deem necessary in connection with determining the eligibility of the applicant for insurance: *Provided*, That examinations required under title I of this Act shall be so conducted that the information derived therefrom may be utilized for share insurance purposes, and examinations conducted by State regulatory agencies shall be utilized by the Board for such purposes to the maximum extent feasible;

(2) to permit and pay the reasonable cost of such examinations as in the judgment of the Board may from time to time be necessary for the protection of the fund and of other insured credit unions;

(3) to permit the Board to have access to any information or report with respect to any examination made by or for any public regulatory authority, including any commission, board, or authority having supervision of a State-chartered credit union, and furnish such additional information with respect thereto as the Board may require;

(4) to provide protection and indemnity against burglary, defalcation, and other similar insurable losses, of the type, in the form, and in an amount at least equal to that required by the laws under which the credit union is organized and operates;

(5) to maintain such regular reserves as may be required by the laws of the State, district, territory, or other jurisdiction pursuant to which it is organized and operated, in the case of a state-chartered credit union, or as may be required by this Act, in the case of a Federal credit union;

(6) to maintain such special reserves as the Board, by regulation or in special cases, may require for protecting the interest of members or to assure that all insured credit unions maintain regular reserves which are not less than those required under title I of this Act;

(7) not to issue or have outstanding any account or security the form of which, by regulation or in special cases, has not been approved by the Board except for accounts authorized by State law for State credit unions;

(8) to pay and maintain its deposit and to pay the premium charges for insurance imposed by this title; and

(9) to comply with the requirements of this title and of regulations prescribed by the Board pursuant thereto.

(c)(1) Before approving the application of any credit union for insurance of its member accounts, the Board shall consider—

(A) the history, financial condition, and management policies of the applicant;

(B) the economic advisability of insuring the applicant without undue risk of the fund;

(C) the general character and the fitness of the applicant's management;

(D) the convenience and needs of the members to be served by the applicant; and

(E) whether the applicant is a cooperative association organized for the purpose of promoting thrift among its members and creating a source of credit for provident or productive purposes.

(2) The Board shall disapprove the application of any credit union for insurance of its member accounts if it finds that its reserves are inadequate, that its financial condition and policies are unsafe or unsound, that its management is unfit, that insurance of its member accounts would otherwise involve undue risk to the fund, or that its powers and purposes are inconsistent with the promotion of thrift among its members and the creation of a source of credit for provident or productive purposes.

(d) Upon the approval of any application for insurance, the Board shall notify the applicant and shall issue to it a certificate evidencing the fact that it is, as of the date of issuance of the certificate, an insured credit union under the provisions of this title.

(e) Prohibition on certain associations.—

(1) In general.—No insured credit union may be sponsored by or accept financial support, directly or indirectly, from any Government-sponsored enterprise, if the credit union includes the customers of the Government-sponsored enterprise in the field of membership of the credit union.

(2) Routine business financing.— Paragraph (1) shall not apply with respect to advances or other forms of financial assistance generally provided by a Governmentsponsored enterprise in the ordinary course of business of the enterprise.

(3) Government-sponsored enterprise defined.—For purposes of this subsection, the term 'Government-sponsored enterprise' has the meaning given to such term in section 1404(e)(1)(A) of the Financial Institutions Reform, Recovery, and Enforcement Act of 1989.

(4) Employee credit union.—No provision of this subsection shall be construed as prohibiting any employee of a Governmentsponsored enterprise from becoming a member of a credit union whose field of membership is the employees of such enterprise.

§ 1782 § 202

Administration of insurance fund.—

(a)(1) Each insured credit union shall make reports of condition to the Board upon dates which shall be selected by it. Such reports of condition shall be in such form and shall contain such information as the Board may require. The reporting dates selected for reports of condition shall be the same for all

insured credit unions except that when any of said reporting dates is a nonbusiness day for any credit union the preceding business day shall be its reporting date. The total amount of the member accounts of each insured credit union as of each reporting date shall be reported in such reports of condition in accordance with regulations prescribed by the Board. Each report of condition shall contain a declaration by the president, by a vice president, by the treasurer, or by any other officer designated by the board of directors of

the reporting credit union to make such declaration, that the report is true and correct to the best of such officer's knowledge and belief. Unless such requirement is waived by the Board, the correctness of each report of condition shall be attested by the signatures of three of the officers of the reporting credit union with the declaration that the report has been examined by them and to the best of their knowledge and belief is true and correct.

(2) The Board may call for such other reports as it may from time to time require.

(3) The Board may require reports of condition to be published in such manner, not inconsistent with any applicable law, as it may direct. Any insured credit union which maintains procedures reasonably adapted to avoid any inadvertent error and, unintentionally and as a result of such an error, fails to submit or publish any report required under this subsection or section 106, within the period of time specified by the Board, or submits or publishes any false or misleading report or information, or inadvertently transmits or publishes any report which is minimally late, shall be subject to a penalty of not more than \$2,000 for each day during which such failure continues or such false or misleading information is not corrected. The insured credit union shall have the burden of proving that an error was inadvertent and that a report was inadvertently transmitted or published late. Any insured credit union which fails to submit or publish any report required under this subsection or section 106, within the period of time specified by the Board, or submits or publishes any false or misleading report or information, in a manner not described in the 2nd preceding sentence shall be subject to a penalty of not more than \$20,000 for each day during which such failure continues or such false or misleading information is not corrected. Notwithstanding the preceding sentence, if any insured credit union knowingly or with reckless disregard for the accuracy of any information or report described in such sentence submits or publishes any false or misleading report or information, the Board may assess a penalty of not more than \$1,000,000 or 1 percent of total assets of such credit union, whichever is less, per day for each day during which such failure continues or such false or misleading information is not corrected. Any penalty imposed under any of the 4 preceding sentences shall be assessed and collected by the Board in the manner provided in section 206(k)(2) (for penalties imposed under such section) and any such assessment (including the determination of the amount of the penalty) shall be subject to the provisions of such section. Any insured credit union against which any penalty is assessed under this subsection shall be afforded an agency hearing if such insured credit union submits a request for such hearing within 20 days after the issuance of the notice of assessment. Section 206(j) shall apply to any proceeding under this subsection.

(4) The Board may accept any report of condition made to any commission, board, or authority having supervision of a State-chartered credit union and may furnish to any such commission, board, or authority reports of condition made to the Board.

(5) Reports required under title I of this Act shall be so prepared that they can be used for share insurance purposes. To the maximum extent feasible, the Board shall use for insurance purposes reports submitted to State regulatory agencies by State-chartered credit unions.

(6) Audit requirement.—

(A) In general.—Before the end of the 120-day period beginning on the date of the enactment of the Financial Institutions Reform, Recovery, and Enforcement Act of 1989 and notwithstanding any other provision of Federal or State law, the Board shall prescribe, by regulation, audit standards which require an outside, independent audit of any insured credit union by a certified public accountant for any fiscal year (of such credit union)—

(i) for which such credit union has not conducted an annual supervisory committee audit;

(ii) for which such credit union has not received a complete and satisfactory supervisory committee audit; or

(iii) during which such credit union has experienced persistent and serious record-keeping deficiencies, as determined by the Board.

(B) Unsafe or unsound practice.— The Board may treat the failure of any insured credit union to obtain an outside, independent audit for any fiscal year for which such audit is required under subparagraph (A) or (D) as an unsafe or unsound practice within the meaning of section 206(b).

(C) Accounting principles.—

(i) In general.—Accounting principles applicable to reports or statements required to be filed with the Board by each insured credit union shall be uniform and consistent with generally accepted accounting principles.

(ii) Board determination.—If the Board determines that the application of any generally accepted accounting principle to any insured credit union is not appropriate, the Board may prescribe an accounting principle for application to the credit union that is no less stringent than generally accepted accounting principles.

(iii) De minimus exception.— This subparagraph shall not apply to any insured credit union, the total assets of which are less than \$10,000,000, unless prescribed by the Board or an appropriate State credit union supervisor.

(D) Large credit union audit requirement.—

(i) In general.—Each insured credit union having total assets of \$500,000,000 or more shall have an annual independent audit of the financial statements of the credit union, performed in accordance with generally accepted auditing standards by an independent certified public accountant or public accountant licensed by the appropriate State or jurisdiction to perform those services.

(ii) Voluntary audits.—If a Federal credit union that is not required to conduct an audit under clause (i), and that has total assets of more than \$10,000,000 conducts such an audit for any purpose, using an independent auditor who is compensated for his or her audit services with respect to that audit, the audit shall be performed consistent with the accountancy laws of the appropriate State or jurisdiction, including licensing requirements.

(7) Report to independent auditor.—

(A) In general.—Each insured credit union which has engaged the services of an independent auditor to audit such depository institution within the past 2 years shall transmit to such auditor a copy of the most recent report of condition made by such credit union (pursuant to this Act or any other provision of law) and a copy of the most recent report of examination received by such credit union.

(B) Additional information.—In addition to the copies of the reports required to be provided to an auditor under subparagraph (A), each insured credit union shall provide such auditor with—

(i) a copy of any supervisory memorandum of understanding with such credit union and any written agreement between the Board or a State regulatory agency and the credit union which is in effect during the period covered by the audit; and

(ii) a report of any action initiated or taken by the Board during such period under subsection (e), (f), (g), (i), (l), or (q) of section 206, or any similar action taken by a State regulatory agency under State law, or any other civil money penalty assessed by the Board under this Act with respect to—

(I) the credit union; or

(II) any institution-affiliated party.

(8) Data sharing with other Agencies and persons—In addition to reports of examination, reports of condition, and other reports required to be regularly provided to the Board (with respect to all insured credit unions, including a credit union for which the Corporation* has been appointed conservator or liquidating agent) or an appropriate State commission, board, or authority having supervision of a Statechartered credit union, the Board may, in

the discretion of the Board, furnish any report of examination or other confidential supervisory information concerning any credit union or other entity examined by the Board under authority of any Federal law, to –

(A) any other Federal or State agency or authority with supervisory or regulatory authority over the credit union or other entity;

(B) any officer, director, or receiver of such credit union or entity; and

(C) any other person that the Board determines to be appropriate.

(b) Certified Statement.—

(1) Statement required.—

(A) In general.—For each calendar year, in the case of an insured credit union with total assets of not more than \$50,000,000, and for each semi-annual period in the case of an insured credit union with total assets of \$50,000,000 or more, an insured credit union shall file with the Board, at such

time as the Board prescribes, a certified statement showing the total amount of insured shares in the credit union at the close of the relevant period and both the amount of its deposit or adjustment of deposit and the amount of the insurance charge due to the Fund for that period, both as computed under subsection (c).

(B) Exception for newly insured credit union.—Subparagraph (A) shall not apply with respect to a credit union that became insured during the reporting period.

(2) Form.—The certified statements required to be filed with the Board pursuant to this subsection shall be in such form and shall set forth such supporting information as the Board shall require.

(3) Certification.—The president of the credit union or any officer designated by the board of directors shall certify, with respect to each statement required to be filed with the Board pursuant to this subsection, that to the best of his or her knowledge and belief the statement is true, correct, complete, and in accordance with this title and the regulations issued under this title.

(c)(1)(A)(i) Each insured credit union shall pay to and maintain with the National Credit Union Share Insurance Fund a deposit in an amount equaling 1 per centum of the credit union's insured shares.

(ii) The Board may, in its discretion, authorize insured credit unions to initially fund such deposit over a period of time in excess of one year if necessary to avoid adverse effects on the condition of insured credit unions.

(iii) Periodic adjustment.—The amount of each insured credit union's deposit shall be adjusted as follows, in accordance with procedures determined by the Board, to reflect changes in the credit union's insured shares.

(I) annually, in the case of an insured credit union with total assets of not more than \$50,000,000; and

(II) semi-annually, in the case of an insured credit union with total assets of \$50,000,000 or more.

(B)(i) The deposit shall be returned to an insured credit union in the event that its insurance coverage is terminated, it converts to insurance coverage from another source, or in the event the operations of the fund are transferred from the National Credit Union Administration Board;

(ii) The deposit shall be returned in accordance with procedures and valuation methods determined by the Board, but in no event shall the deposit be returned any later than one year after the final date on which no shares of the credit union are insured by the Board.

(iii) The deposit shall not be returned in the event of liquidation on account of bankruptcy or insolvency.

(iv) The deposit funds may be used by the fund if necessary to meet its expenses, in which case the amount so used shall be expensed and shall be replenished by insured credit unions in accordance with procedures established by the Board.

(2) Insurance premium charges.—

(A) In general.—Each insured credit union shall, at such times as the Board prescribes (but not more than twice in any calendar year), pay to the Fund a premium charge for insurance in an amount stated as a percentage of insured shares (which shall be the same for all insured credit unions).

(B) Relation of premium charge to equity ratio of Fund.—The Board may assess a premium charge only if—

(i) the Fund's equity ratio is less than 1.3 percent; and

(ii) the premium charge does not exceed the amount necessary to restore the equity ratio to 1.3 percent.

(C) Premium charge required if equity ratio falls below 1.2 percent.—If the Fund's equity ratio is less than 1.2 percent, the Board shall, subject to subparagraph (B), assess a premium charge in such an amount as the Board determines to be necessary to restore the equity ratio to, and maintain that ratio at, 1.2 percent.

(3) Distributions from Fund required.—

(A) In general.—The Board shall effect a pro rata distribution to insured credit unions after each calendar year if, as of the end of that calendar year—

(i) any loans to the Fund from the Federal Government, and any interest on those loans, have been repaid;

(ii) the Fund's equity ratio exceeds the normal operating level; and

(iii) the Fund's available assets ratio exceeds 1.0 percent.

(B) Amount of distribution.—The Board shall distribute under subparagraph

(A) the maximum possible amount that—

(i) does not reduce the Fund's equity ratio below the normal operating level; and

(ii) does not reduce the Fund's available assets ratio below 1.0 percent.

(C) Calculation based on certified statements.—In calculating the Fund's equity ratio and available assets ratio for purposes of this paragraph, the Board shall determine the aggregate amount of the insured shares in all insured credit unions from insured credit unions certified statements under subsection (b) for the final reporting period of the calendar year referred to in subparagraph (A).

(4) Timeliness and accuracy of data.—In calculating the available assets ratio and equity ratio of the Fund, the Board shall use the most current and accurate data reasonably available.

(d)(1) Any insured credit union which fails to make any report of condition under subsection (a) of this section or to file any certified statement required to be filed by it in connection with determining the amount of its deposit or any premium charge for insurance may be compelled to make such report or to file such statement by mandatory injunction or other appropriate remedy in a suit brought for such purpose by the Board against the credit union and any officer or officers thereof.

Any such suit may be brought in any court of the United States of competent jurisdiction in the district or territory in which the principal office of the credit union is located.

(2) Penalty for failure to make accurate certified statement or to pay deposit or premium.—

(A) First tier.—Any insured credit union which—

(i) maintains procedures reasonably adapted to avoid any inadvertent error and, unintentionally and as a result of such an error, fails to submit any certified statement under subsection (b)(1) within the period of time required or submits a false or misleading certified statement under such subsection; or

(ii) submits the statement at a time which is minimally after the time required, shall be subject to a penalty of not more than \$2,000 for each day during which such failure continues or such false and misleading information is not corrected. The insured credit union shall have the burden of proving that an error was inadvertent or that a statement was inadvertently submitted late.

(B) Second tier.—An insured credit union which—

(i) fails to submit any certified statement under subsection (b)(1) within the period of time required or submits a false or misleading certified statement in a manner not described in subparagraph (A); or

(ii) fails or refuses to pay any deposit or premium for insurance required under this title, shall be subject to a penalty of not more than \$20,000 for each day during which such failure continues, such false and misleading information is not corrected, or such deposit or premium is not paid.

(C) Third tier.—Notwithstanding subparagraphs (A) and (B), if any insured credit union knowingly or with reckless disregard for the accuracy of any certified statement under subsection (b)(1) or submits a false or misleading certified statement under such subsection, the Board may assess a penalty of not more than \$1,000,000 or not more than 1 percent of the total assets of the institution, whichever is less, per day for each day during which the failure continues or the false or misleading information in such statement is not corrected.

(D) Assessment procedure.—Any penalty imposed under this paragraph shall be assessed and collected by the Board in the manner provided in section 206(k)(2) (for penalties imposed under such section) and any such assessment (including the determination of the amount of the penalty) shall be subject to the provisions of such section.

(E) Hearing.—Any insured credit union against which any penalty is assessed under this paragraph shall be afforded an agency hearing if the credit union submits a request for such hearing within 20 days after the issuance of the notice of the assessment.

Section 206(j) shall apply to any proceeding under this subparagraph.

(F) Special rule for disputed payments.— No penalty may be assessed for the failure of any insured credit union to pay any deposit or premium for insurance if—

(i) the failure is due to a dispute between the credit union and the Board over the amount of the deposit or premium which is due from the credit union; and

(ii) the credit union deposits security satisfactory to the Board for payment of the deposit or insurance premium upon final determination of the dispute.

(3) No insured credit union shall pay any dividends on its insured shares or distribute any of its assets while it remains in default in the payment of its deposit or any premium charge for insurance due to the fund.

Any director or officer of any insured credit union who knowingly participates in the declaration or payment of any such dividend or in any such distribution shall, upon conviction, be fined not more than \$1,000 or imprisoned not more than one year, or both.

The provisions of this paragraph shall not be applicable in any case in which the default is due to a dispute between the credit union and the Board over the amount of its deposit or the premium charge due to the fund if the credit union deposits security satisfactory to the Board for payment of its deposit or the premium charge upon final determination of the issue.

(e) The Board, in a suit brought at law or in equity in any court of competent jurisdiction, shall be entitled to recover from any insured credit union the amount of any unpaid deposit or premium charge for insurance lawfully payable by the credit union to the fund, whether or not such credit union shall have made any report of condition under subsection (a) of this section or filed any certified statement required under subsection (b) of this section

and whether or not suit shall have been brought to compel the credit union to make any such report or to file any such statement.

No action or proceeding shall be brought for the recovery of any deposit or premium charge due to the fund, or for the recovery of any amount paid to the fund in excess of the amount due it, unless such action or proceeding shall have been brought within five years after the right accrued for which the claim is made. Where the insured credit union has made or filed with the Board a false or fraudulent certified statement with the intent to evade, in whole or in part, the payment of its deposit or any premium charge, the claim shall not be deemed to have accrued until the discovery by the Board of the fact that the certified statement is false or fraudulent.

(f) Should any Federal credit union fail to make any report of condition under subsection (a) of this section or to file any certified statement required to be filed under subsection (b) of this section or to pay its deposit or any premium charge for insurance required to be paid under any provision of this title, and should the credit union fail to correct such failure within thirty days after written notice has been given by the Board to an officer of the credit union citing this subsection and stating that the credit union has failed to make any such report or file any such statement or pay any such deposit or premium charge as required by law, all the rights, privileges, and franchises of the credit union granted to it under title I of this Act shall be thereby forfeited. Whether or not the penalty provided in this subsection has been incurred shall be determined and adjudged by any court of the United States of competent jurisdiction in a suit brought for that purpose in the district or territory in which the principal office of such credit union is located, under direction of and by the Board in its own name, before the credit union shall be declared dissolved. The remedies provided in this subsection and in subsections (d) and (e) of this section shall not be construed as limiting any other remedies against any insured credit union but shall be in addition thereto.

(g) Each insured credit union shall maintain such records as will readily permit verification of the correctness of its reports of condition, certified statements, deposits and premium charges for insurance. However, no insured credit union shall be required to retain such records for such purpose for a period in excess of five years from the date of the making of any such report, the filing of any such statement, or the payment of any deposit or adjustment thereof or any premium charge, except that when there is a dispute between the insured credit union and the Board over the amount of any deposit or adjustment thereof or any premium charge, for insurance the credit union shall retain such records until final determination of the issue.

(h) Definitions.—For purposes of this section, the following definitions shall apply:

(1) Available assets ratio.—The term ‘available assets ratio’, when applied to the Fund, means the ratio of—

(A) the amount determined by subtracting—

(i) direct liabilities of the Fund and contingent liabilities for which no provision for losses has been made, from

(ii) the sum of cash and the market value of unencumbered investments authorized under section 203(c), to

(B) the aggregate amount of the insured shares in all insured credit unions.

(2) Equity ratio.—The term ‘equity ratio’, when applied to the Fund, means the ratio of—

(A) the amount of Fund capitalization, including insured credit unions’ 1 percent capitalization deposits and the retained earnings balance of the Fund (net of direct liabilities of the Fund and contingent liabilities for which no provision for losses has been made); to

(B) the aggregate amount of the insured shares in all insured credit unions.

(3) Insured shares.—The term ‘insured shares’, when applied to this section, includes share, share draft, share certificate, and other similar accounts as determined by the Board, but does not include amounts exceeding the insured account limit set forth in section 207(k)(1).

(4) Normal operating level.—The term ‘normal operating level’, when applied to the Fund, means an equity ratio specified by the Board, which shall be not less than 1.2 percent and not more than 1.5 percent.

§ 1783 § 203

National Credit Union Share Insurance Fund.—(a) There is hereby created in the Treasury of the United States a National Credit Union Share Insurance Fund which shall be used by the Board as a revolving fund for carrying out the purposes of this title. Money in the fund shall be available upon requisition by the Board, without fiscal year limitation, for making payments of insurance under section 207 of this title, for providing assistance and making expenditures under section 208 of this title in connection with the liquidation or threatened liquidation of insured credit unions, and for such administrative and other expenses incurred in carrying out the purposes of this title as it may determine to be proper.

(b) All deposits and premium charges for insurance paid pursuant to the provisions of section 202 of this title and all fees for examination and all penalties collected by the Board under any provision of this title shall be deposited in the National Credit Union Share Insurance Fund. The Board shall report annually to the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs of the Senate and the Committee on Banking, Finance and Urban Affairs of the House of Representatives with respect to the operating level of the fund.

Such report shall also include the results of an independent audit of the fund.

(c) The Board may authorize the Secretary of the Treasury to invest and reinvest such portions of the fund as the Board may determine are not needed for current operations in any interest-bearing securities of the United States or in any securities guaranteed as to both principal and interest by the United States or in bonds or other obligations which are lawful investments for fiduciary, trust, and public funds of the United States, and the income therefrom shall constitute a part of the fund.

(d)(1) If, in the judgment of the Board, a loan to the fund is required at any time for carrying out the purposes of this title, the Secretary of the Treasury shall make the loan, but loans under this paragraph shall not exceed in the aggregate \$100,000,000 outstanding at any one time. Except as otherwise provided in this subsection and in subsection (e) of this section, each loan under this paragraph shall be made on such terms as may be fixed by agreement between the Board and the Secretary of the Treasury.

(2) Interest shall accrue to the Treasury on the amount of any outstanding loans made to the fund pursuant to paragraph (1) of this subsection on the basis of the average daily amount of such outstanding loans determined at the close of each fiscal year with respect to such year, and the Board shall pay the interest so accruing into the Treasury as miscellaneous receipts annually from the fund. The Secretary of the Treasury shall determine the applicable interest rate in advance by calculating the average yield to maturity (on the basis of daily closing market bid quotations during the month of September of the preceding fiscal year) on outstanding marketable public debt obligations of the United States having a maturity date of five or less years from the first day of such month of September and by adjusting such yield to the nearest one-eighth of 1 per centum.

(3) For the purpose of making loans under paragraph (1) of this subsection, the Secretary of the Treasury is authorized to use as a public debt transaction the proceeds of the sale of any securities issued under the Second Liberty Bond Act, as amended, and the purposes for which securities may be issued under the Second Liberty Bond Act, as

amended, are hereby extended to include such loans. All loans and repayments under this section shall be treated as public debt transactions of the United States.

(e) So long as any loans to the fund are outstanding, the Board shall from time to time, not less often than annually, determine whether the balance in the fund is in excess of the amount which, in its judgment, is needed to meet the requirements of the fund and shall pay such excess to the Secretary of the Treasury, to be credited against the loans to the fund.

(f) In addition to the authority to borrow from the Secretary of the Treasury provided in subsection (d), if in the judgment of the Board, a loan to the fund is required at any time for carrying out the purposes of this title, the fund is authorized to borrow from the National Credit Union Administration Central Liquidity Facility.

§ 1784 § 204

Examination of insured credit unions.—(a) The Board shall appoint examiners who shall have power, on its behalf, to examine any insured credit union, any credit union making application for insurance of its member accounts, or any closed insured credit union whenever in the judgment of the Board an examination is necessary to determine the condition of any such credit union for insurance purposes.

Each examiner shall have power to make a thorough examination of all of the affairs of the credit union and shall make a full and detailed report of the condition of the credit union to the Board. The Board in like manner shall appoint claim agents who shall have power to investigate and examine all claims for insured member accounts. Each claim agent shall have power to administer oaths and affirmations, to examine and to take and preserve testimony under oath as to any matter in respect to claims for insured accounts, and to issue subpoenas and subpoenas duces tecum and, for the enforcement thereof, to apply to the United States district court for the judicial district or the United States court in any territory in which the principal office of the credit union is located or in which the witness resides or carries on business. Such courts shall have jurisdiction and power to order and require compliance with any such subpoena.

(b) In connection with examinations of insured credit unions, or with other types of investigations to determine compliance with applicable law and regulations, the Board, or its designated representatives, shall have power to administer oaths and affirmations, to examine and to take and preserve testimony under oath as to any matter in respect of the affairs of any such credit union, and to issue subpoenas and subpoenas duces tecum and to exercise such other powers as are set forth in section 206(p), and, for the enforcement thereof, to apply to the United States district court for the judicial district or the United States court in any territory in which the principal office of the credit union is located or in which the witness resides or carries on business. Such courts shall have jurisdiction and power to order and require compliance with any such subpoena.

(c) In cases of refusal to obey a subpoena issued to, or contumacy by, any person, the Board may invoke the aid of any court of the United States within the jurisdiction of which such hearing, examination, or investigation is carried on, or where such person resides or carries on business, in requiring the attendance and testimony of witnesses and the production of books, records, or other papers. Such court may issue an order requiring such person to appear before the Board, or before a person designated by it, there to produce records, if so ordered, or to give testimony touching the matter in question. Any failure to obey such order of the court may be punished by such court as a contempt thereof. All process in any such case may be served in the judicial district whereof such person is an inhabitant or carries on business or wherever he may be found. No person shall be excused from attending and testifying or from producing books,

records, or other papers in obedience to a subpoena issued under the authority of this title on the ground

that the testimony or evidence, documentary or otherwise, required of him may tend to incriminate him or subject him to penalty or forfeiture, but no individual shall be prosecuted or subject to any penalty or forfeiture for or on account of any transaction, matter, or thing concerning which he is compelled to testify or produce evidence, documentary or otherwise, after having claimed his privilege against selfincrimination, except that such individual so testifying shall not be exempt from prosecution and punishment for perjury committed in so testifying.

(d) The Administration may accept any report of examination made by or to any commission, board, or authority having supervision of a State-chartered credit union and may furnish to any such commission, board, or authority reports of examination made on behalf of the Board.

(e) Flood Insurance Compliance by Insured Credit Unions.—

(1) Examination.—The Board shall, during each examination conducted under this section, determine whether the insured credit union is complying with the requirements of the national flood insurance program.

(2) Report.—

(A) Requirement.—Not later than 1 year after the date of enactment of the Riegle Community Development and Regulatory Improvement Act of 1994 and biennially thereafter for the next 4 years, the Board shall submit a report to the Congress on compliance by insured credit unions with the requirements of the national flood insurance program.

(B) Contents.—The report shall include a description of the methods used to determine compliance, the number of insured credit unions examined during the reporting year, a listing and total number of insured credit unions found not to be in compliance, actions taken to correct incidents of noncompliance, and an analysis of compliance, including a discussion of any trends, patterns, and problems, and recommendations regarding reasonable actions to improve the efficiency of the examinations processes.

(f) Access to Liquidity.—The Board shall—

(1) periodically assess the potential liquidity needs of each insured credit union, and the options that the credit union has available for meeting those needs; and

(2) periodically assess the potential liquidity needs of insured credit unions as a group, and the options that insured credit unions have available for meeting those needs.

(g) Sharing Information With Federal Reserve Banks.—The Board shall, for the purpose of facilitating insured credit unions' access to liquidity, make available to the Federal reserve banks (subject to appropriate assurances of confidentiality) information relevant to making advances to such credit unions, including the Board's reports of examination.

§ 1785 § 205

Requirements governing insured credit unions.—

(a) Insurance logo. —

(1) Insured credit unions. —

(A) In general. — Each insured credit union shall display at each place of business maintained by that credit union a sign or signs relating to the insurance of the share accounts of the institution, in accordance with regulations to be prescribed by the Board.

(B) Statement to be included. — Each sign required under subparagraph (A) shall include a statement that insured share accounts are backed by the full faith and credit of the United States Government.

(2) Regulations. – The Board shall prescribe regulations to carry out this subsection, including regulations governing the substance of signs required by paragraph (1) and the manner of display or use of such signs.

(3) Penalties. – For each day that an insured credit union continues to violate this subsection or any regulation issued under this subsection, it shall be subject to a penalty of not more than \$100, which the Board may recover for its use.

(b)(1) Except as provided in paragraph (2), no insured credit union shall, without the prior approval of the Board;

(A) merge or consolidate with any non-insured credit union or institution;

(B) assume liability to pay any member accounts in, or similar liabilities of, any non-insured credit union or institution;

(C) transfer assets to any noninsured credit union or institution in consideration of the assumption of liabilities for any portion of the member accounts in such insured credit union; or

(D) convert into a noninsured credit union or institution.

(2) Conversion of insured credit unions to mutual savings banks.—

(A) In general.—Notwithstanding paragraph (1), an insured credit union may convert to a mutual savings bank or savings association (if the savings association is in mutual form), as those terms are defined in section 3 of the Federal Deposit Insurance Act, without the prior approval of the Board, subject to the requirements and procedures set forth in the laws and regulations governing mutual savings banks and savings associations.

(B) Conversion proposal.—A proposal for a conversion described in subparagraph (A) shall first be approved, and a date set for a vote thereon by the members (either at a meeting to be held on that date or by written ballot to be filed on or before that date), by a majority of the directors of the insured credit union. Approval of the proposal for conversion shall be by the affirmative vote of a majority of the members of the insured credit union who vote on the proposal.

(C) Notice of proposal to members.— An insured credit union that proposes to convert to a mutual savings bank or savings association under subparagraph (A) shall submit notice to each of its members who is eligible to vote on the matter of its intent to convert—

(i) 90 days before the date of the member vote on the conversion;

(ii) 60 days before the date of the member vote on the conversion; and

(iii) 30 days before the date of the member vote on the conversion.

(D) Notice of proposal to Board.— The Board may require an insured credit union that proposes to convert to a mutual savings bank or savings association under subparagraph (A) to submit a notice to the Board of its intent to convert during the 90- day period preceding the date of the completion of the conversion.

(E) Inapplicability of Act upon conversion.—Upon completion of a conversion described in subparagraph (A), the credit union shall no longer be subject to any of the provisions of this Act.

(F) Limit on compensation of officials.—

(i) In general.—No director or senior management official of an insured credit union may receive any economic benefit in connection with a conversion of the credit union as described in subparagraph (A), other than—

(I) director fees; and

(II) compensation and other benefits paid to directors or senior management officials of the converted institution in the ordinary course of business.

(ii) Senior management official.— For purposes of this subparagraph, the term ‘senior management official’ means a chief executive officer, an assistant chief executive officer, a chief financial officer, and any other senior executive officer (as defined by the appropriate Federal banking agency pursuant to section 32 (f) of the Federal Deposit Insurance Act).

(G) Consistent rules.—

(i) In general.—Not later than 6 months after the date of enactment of the Credit Union Membership Access Act, the Administration shall promulgate final rules applicable to charter conversions described in this paragraph that are consistent with rules promulgated by other financial regulators, including the Office of Thrift Supervision and the Office of the Comptroller of the Currency.

The rules required by this clause shall provide that charter conversion by an insured credit union shall be subject to regulation that is no more or less restrictive than that applicable to charter conversions by other financial institutions.

(ii) Oversight of member vote.—The member vote concerning charter conversion under this paragraph shall be administered by the Administration, and shall be verified by the Federal or State regulatory agency that would have jurisdiction over the institution after the conversion. If either the Administration or that regulatory agency disapproves of the methods by which the member vote was taken or procedures applicable to the member vote, the member vote shall be taken again, as directed by the Administration or the agency.

(3) Except with the prior written approval of the Board, no insured credit union shall merge or consolidate with any other insured credit union or, either directly or indirectly, acquire the assets of, or assume liability to pay any member accounts in, any other insured credit union.

(c) In granting or withholding approval or consent under subsection (b) of this section, the Board shall consider—

- (1) the history, financial condition, and management policies of the credit union;
- (2) the adequacy of the credit union's reserves;
- (3) the economic advisability of the transaction;
- (4) the general character and fitness of the credit union's management;
- (5) the convenience and needs of the members to be served by the credit union; and
- (6) whether the credit union is a cooperative association organized for the purpose of promoting thrift among its members and creating a source of credit for provident or productive purposes.

(d) Prohibition.—

(1) In General.—Except with the prior written consent of the Board—

(A) any person who has been convicted of any criminal offense involving dishonesty or a breach of trust or has agreed to enter into a pretrial diversion or similar program in connection with a prosecution for such offense, may not—

(i) become, or continue as, an institution-affiliated party with respect to any insured credit union; or

(ii) otherwise participate, directly or indirectly, in the conduct of the affairs of any insured credit union; and

(B) any insured credit union may not permit any person referred to in subparagraph (A) to engage in any conduct or continue any relationship prohibited under such subparagraph.

(2) Minimum 10-year prohibition period for certain offenses.—

(A) In general.—If the offense referred to in paragraph (1)(A) in connection with any person referred to in such paragraph is—

(i) an offense under—

(I) section 215, 656, 657, 1005, 1006, 1007, 1008, 1014, 1032, 1344, 1517, 1956, or 1957 of title 18, United States Code; or

(II) section 1341 or 1343 of such title which affects any financial institution (as defined in section 20 of such title): or

(ii) the offense of conspiring to commit any such offense, the Board may not consent to any exception to the application paragraph (1) to such person during the 10-year period beginning on the date the conviction or the agreement of the person becomes final.

(B) Exception by order of sentencing court.—

(i) In general.—On motion of the Board, the court in which the conviction or the agreement of a person referred to in subparagraph

(A) has been entered may grant an exception to the application of paragraph (1) to such person if granting the exception is in the interest of justice.

(ii) Period for filing.—A motion may be filed under clause (i) at any time during the 10-year period described in subparagraph (A) with regard to the person on whose behalf such motion is made.

(3) Penalty.—Whoever knowingly violates paragraph (1) or (2) shall be fined not more than \$1,000,000 for each day such prohibition is violated or imprisoned for not more than 5 years, or both.

(e)(1) The Board shall promulgate rules establishing minimum standards with which each insured credit union must comply with respect to the installation, maintenance, and operation of security devices and procedures, reasonable in cost, to discourage robberies, burglaries, and larcenies and to assist in the identification and apprehension of persons who commit such acts.

(2) The rules shall establish the time limits within which insured credit unions shall comply with the standards and shall require the submission of periodic reports with respect to the installation, maintenance, and operation of security devices and procedures.

(3) An insured credit union which violates a rule promulgated pursuant to this subsection shall be subject to a civil penalty which shall not exceed \$100 for each day of the violation.

(f)(1) Every insured credit union is authorized to maintain, and make loans with respect to, share draft accounts in accordance with rules and regulations prescribed by the Board. Except as provided in paragraph (2), an insured credit union may pay dividends on share draft accounts and may permit the owners of such share draft accounts to make withdrawals by negotiable or transferable instruments or other orders for the purpose of making transfers to third parties.

(2) Paragraph (1) shall apply only with respect to share draft accounts in which the entire beneficial interest is held by one or more individuals or members or by an organization which is operated primarily for religious, philanthropic, charitable, educational, or other similar purposes and which is not operated for profit, and with respect to deposits of public funds by an officer, employee, or agent of the United States, any State, county, municipality, or political subdivision thereof, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, American Samoa, Guam, any territory or possession of the United States, or any political subdivision thereof.

(g)(1) If the applicable rate prescribed in this subsection exceeds the rate an insured credit union would be permitted to charge in the absence of this subsection, such credit union may, notwithstanding any State constitution or statute which is hereby preempted for the purposes of this subsection, take, receive, reserve, and charge on any loan, interest at a rate of not more than 1 per centum in excess of the discount rate on ninety-day commercial paper in effect at the Federal Reserve bank in the Federal Reserve district where such insured credit union is located or at the rate allowed by the laws of the State, territory, or district where such credit union is located, whichever may be greater.

(2) If the rate prescribed in paragraph (1) exceeds the rate such credit union would be permitted to charge in the absence of this subsection, and such State fixed rate is thereby preempted by the rate described in paragraph (1), the taking, receiving, reserving, or charging a greater rate than is allowed by paragraph (1), when knowingly done, shall be deemed a forfeiture of the entire interest which the loan carries with it, or which has been

agreed to be paid thereon. If such greater rate of interest has been paid, the person who paid it may recover, in a civil action commenced in a court of appropriate jurisdiction not later than two years after the date of such payment, an amount equal to twice the amount of interest paid from the credit union taking or receiving such interest.

(h) Notwithstanding any other provision of law, the Board may authorize a merger or consolidation of an insured credit union which is insolvent or is in danger of insolvency with any other insured credit union or may authorize an insured credit union to purchase any of the assets of, or assume any of the liabilities of, any other insured credit union which is insolvent or in danger of insolvency if the Board is satisfied that—

(1) an emergency requiring expeditious action exists with respect to such other insured credit union;

(2) other alternatives are not reasonably available; and

(3) the public interest would best be served by approval of such merger, consolidation, purchase, or assumption.

(i)(1) Notwithstanding any other provision of this Act or of State law, the Board may authorize an institution whose deposits or accounts are insured by the Federal Deposit Insurance Corporation or the Federal Savings and Loan Insurance Corporation to purchase any of the assets of or assume any of the liabilities of an insured credit union which is insolvent or in danger of insolvency, except that prior to exercising this authority the Board must attempt to effect the merger or consolidation of an insured credit union which is insolvent or in danger of insolvency with another insured credit union, as provided in subsection (h).

(2) For purposes of the authority contained in paragraph (1), insured accounts of the credit union may upon consummation of the purchase and assumption be converted to insured deposits or other comparable accounts in the acquiring institution, and the Board and the National Credit Union Share Insurance Fund shall be absolved of any liability to the credit union's members with respect to those accounts.

(j) Privileges not affected by disclosure to banking agency or supervisor. —

(1) In general. — The submission by any person of any information to the Administration, any State credit union supervisor, or foreign banking authority for any purpose in the course of any supervisory or regulatory process of such Board, supervisor, or authority shall not be construed as waiving, destroying, or otherwise affecting any privilege such person may claim with respect to such information under Federal or State law as to any person or entity other than such Board, supervisor, or authority.

(2) Rule of construction. — No provision of paragraph (1) may be construed as implying or establishing that —

(A) any person waives any privilege applicable to information that is submitted or transferred under any circumstance to which paragraph (1) does not apply; or

(B) any person would waive any privilege applicable to any information by submitting the information to the Administration, any State credit union supervisor, or foreign banking authority, but for this subsection.

§ 1786 § 206

Termination of insured credit union status; cease-and-desist orders; removal or suspension from office; procedure.—

(a)(1) Any insured credit union other than a Federal credit union may, upon not less than ninety days' written notice to the Board and upon the affirmative vote of a majority of its members within one year prior to the giving of such notice, terminate its status as an insured credit union.

(2) Any insured credit union, other than a Federal credit union, which has obtained a new certificate of insurance from a corporation authorized and duly licensed to insure member

accounts may upon not less than ninety days' written notice to the Board convert from status as an insured credit union under this Act: *Provided*, That at the time of giving notice to the Board the provisions of paragraph (b)(1) of this section are not being invoked against the credit union.

(b)(1) Whenever, in the opinion of the Board, any insured credit union is engaging or has engaged in unsafe or unsound practices in conducting the business of such credit union, or is in an unsafe or unsound condition to continue operations as an insured credit union, or is violating or has violated an applicable law, rule, regulation, order, or any condition imposed in writing by the Board in connection with any action on any application, notice, or other request by the credit union or institution affiliated party, or is violating or has violated any written agreement entered into with the Board, the Board shall serve upon the credit union a statement with respect to such practices or conditions or violations for the purpose of securing the correction thereof. In the case of an insured State-chartered credit union, the Board shall send a copy of such statement to the commission, board, or authority, if any, having supervision of such credit union.

Unless such correction shall be made within one hundred and twenty days after service of such statement, or within such shorter period of not less than twenty days after such service as the Board shall require in any case where it determines that the insurance risk with respect to such credit union could be unduly jeopardized by further delay in the correction of such practices or conditions or violations, or as the commission, board, or authority having supervision of such credit union, if any, shall require in the case of an insured Statechartered credit union, the Board, if it shall determine to proceed further, shall give to the credit union not less than thirty days written notice of its intention to terminate the status of the credit union as an insured credit union.

Such notice shall contain a statement of the facts constituting the alleged unsafe and unsound practices or conditions or violations and shall fix a time and place for a hearing thereon. Such hearing shall be fixed for a date not earlier than thirty days nor later than sixty days after service of such notice unless an earlier or a later date is set by the Board at the request of the credit union. Unless the credit union shall appear at the hearing by a duly authorized representative, it shall be deemed to have consented to the termination of its status as an insured credit union. In the event of such consent, or if upon the record made at any such hearing the Board shall find

that any unsafe or unsound practice or condition or violation specified in the notice has been established and has not been corrected within the time above-prescribed in which to make such correction, the Board may issue and serve upon the credit union an order terminating its status as an insured credit union on a date subsequent to the date of such finding and subsequent to the expiration of the time specified in the notice.

(2) Any credit union whose insured status has been terminated by order of the Board under this subsection shall have the right of judicial review of such order only to the same extent as provided for the review of orders under subsection (j) of this section.

(c) In the event of the termination of a credit union's status as an insured credit union as provided under subsection (a)(1) or (b) of this section, the credit union shall give prompt and reasonable notice to all of its members whose accounts are insured that it has ceased to be an insured credit union. It may include in such notice a statement of the fact that member accounts insured on the effective date of such termination, to the extent not withdrawn, remain insured for one year from the date of such termination, but it shall not further represent itself in any manner as an insured credit union. In the event of failure to give the notice as herein provided to members whose accounts are insured, the Board is authorized to give reasonable notice.

(d)(1) After the termination of the insured status of any credit union as provided under subsection (a)(1) or (b) of this section, insurance of its member accounts to the extent that

they were insured on the effective date of such termination, less any amounts thereafter withdrawn which reduce the

accounts below the amount covered by insurance on the effective date of such termination, shall continue for a period of one year, but no shares issued by the credit union or deposits made after the date of such termination shall be insured by the Board.

The credit union shall continue to maintain its deposits with and pay premiums to the Board during such period as in the case of an insured credit union and the Board shall have the right to examine such credit union from time to time during the period during which such insurance continues. Such credit union shall, in all other respects, be subject to the duties and obligations of an insured credit union for the period of one year from the date of such termination. In the event that such credit union shall be closed for liquidation within such period of one year, the Board shall have the same powers and rights with respect to such credit union as in the case of an insured credit union. Notwithstanding the above, when an insured credit union's insured status is terminated and the credit union subsequently obtains comparable insurance coverage from another source, insurance of its accounts by the fund may cease immediately upon the effective date of such comparable coverage by mutual consent of the credit union and the Board.

(2) No credit union shall convert from status as an insured credit union under this Act as provided under subsection (a)(2) of this section until the proposition for such conversion has been approved by a majority of all the directors of the credit union, and by affirmative vote of a majority of the members of the credit union who vote on the proposition in a vote in which at least 20 per centum of the total membership of the credit union participates. Following approval by the directors, written notice of the proposition and of the date set for the membership vote shall be delivered in person to each member, or mailed to each member at the address for such member appearing on the records of the credit union, not more than thirty nor less than seven days prior to such date. The membership shall be given the opportunity to vote by mail ballot. If the proposition is approved by the membership, prompt and reasonable notice of insurance conversion shall be given to all members.

(3) In the event of a conversion of a credit union from status as an insured credit union under this Act as provided under subsection (a)(2) of this section, premium charges payable under section 202(c) of this Act shall be reduced by an amount proportionate to the number of calendar months for which the converting credit union will no longer be insured under this Act. As long as a converting credit union remains insured under this Act, it shall remain subject to all of the provisions of title II of this Act.

(e) Opinion of Board as to unsound condition of credit union; notice of charges; hearing; order to cease and desist; judicial review; affirmative action; limitation of activities. –

(1) If, in the opinion of the Board, any insured credit union, credit union which has insured accounts, or any institution-affiliated party is engaging or has engaged, or the Board has reasonable cause to believe that the credit union or any institution-affiliated party is about to engage, in an unsafe or unsound practice in conducting the business of such credit union, or is violating or has violated, or the Board has reasonable cause to believe that the credit union or any institution-affiliated party is about to violate, a law, rule, or regulation, or any condition imposed in writing by the Board in connection with the granting of any application or other request by the credit union or any written agreement entered into with the Board, the Board may issue and serve upon the credit union or such party notice of charges in respect thereof. The notice shall contain a statement of the facts constituting the alleged violation or violations or the unsafe or unsound practice or practices, and shall fix a time and place at which a hearing will be held to determine whether an order to cease and desist therefrom should issue against the credit union or the institution-affiliated party. Such hearing shall be fixed for a date not earlier than thirty

days nor later than sixty days after service of such notice unless an earlier or a later date is set by the Board at the request of any party so served. Unless the party or parties so served shall appear at the hearing by a duly authorized representative, they shall be deemed to have consented to the issuance of the cease-and-desist order. In the event of such consent, or if upon the record made at any such hearing, the Board shall find that any violation or unsafe or unsound practice specified in the notice of charges has been established, the Board may issue and serve upon the credit union or the institution-affiliated party an order to cease and desist from any such violation or practice. Such order may, by provisions which may be mandatory or otherwise, require the credit union or its institution-affiliated parties to cease and desist from the same, and, further, to take affirmative action to correct the conditions resulting from any such violation or practice.

(2) A cease-and-desist order shall become effective at the expiration of thirty days after the service of such order upon the credit union or other person concerned (except in the case of a cease-and-desist order issued upon consent, which shall become effective at the time specified therein), and shall remain effective and enforceable as provided therein, except to such extent as it is stayed, modified, terminated, or set aside by action of the Board or a reviewing court.

(3) Affirmative action to correct conditions resulting from violations or practices.—The authority to issue an order under this subsection and subsection (f) which requires an insured credit union or any institution-affiliated party to take affirmative action to correct any conditions resulting from any violation or practice with respect to which such order is issued includes the authority to require such insured credit union or such party to—

(A) make restitution or provide reimbursement, indemnification, or guarantee against loss if—

(i) such credit union or such party was unjustly enriched in connection with such violation or practice; or

(ii) the violation or practice involved a reckless disregard for the law or any applicable regulations or prior order of the Board;

(B) restrict the growth of the institution;

(C) rescind agreements or contracts;

(D) dispose of any loan or asset involved;

(E) employ qualified officers or employees (who may be subject to approval by the Board at the direction of such Board); and

(F) take such other action as the Board determines to be appropriate.

(4) Authority to limit activities.—The authority to issue an order under this subsection or subsection (f) includes the authority to place limitations on the activities or functions of an insured credit union or any institution-affiliated party.

(f) Temporary cease and desist order; injunctive procedure –

(1) Whenever the Board shall determine that the violation or threatened violation or the unsafe or unsound practice or practices, specified in the notice of charges served upon the credit union or any institution-affiliated party pursuant to paragraph (1) of subsection

(e) of this section, or the continuation thereof, is likely to cause insolvency or significant dissipation of assets or earnings of the credit union, or is likely to weaken the condition of the credit union or otherwise prejudice the interests of its insured members prior to the completion of the proceedings conducted

pursuant to paragraph (1) of subsection (e) of this section, the Board may issue a temporary order requiring the credit union or such party to cease and desist from any such violation or practice and to take affirmative action to prevent such insolvency, dissipation, condition, or prejudice pending completion of such proceedings. Such order may include any requirement authorized under subsection

(e)(3). Such order shall become effective upon service upon the credit union or such party participating in the conduct of the affairs of such credit union and, unless set aside, limited, or suspended by a court in proceedings authorized by paragraph (2) of this subsection, shall remain effective and enforceable pending the completion of the administrative proceedings pursuant to such notice and until such time as the Board shall dismiss the charges specified in such notice, or if a cease-and-desist order is issued against the credit union or such party until the effective date of such order.

(2) Within ten days after the credit union concerned or any institution-affiliated party has been served with a temporary cease-and-desist order, the credit union or such party may apply to the United States district court for the judicial district in which the home office of the credit union is located, or the United States District Court for the District of Columbia, for an injunction setting aside, limiting, or suspending the enforcement, operation, or effectiveness of such order pending the completion of the administrative proceedings pursuant to the notice of charges served upon the credit union or such party under paragraph (1) of subsection (e) of this section, and such court shall have jurisdiction to issue such injunction.

(3) Incomplete or inaccurate records.—

(A) Temporary order.—If a notice of charges served under subsection (e)(1) specifies, on the basis of particular facts and circumstances, that an insured credit union's books and records are so incomplete or inaccurate that the Board is unable, through the normal supervisory process, to determine the financial condition of that insured credit union or the details or purpose of any transaction or transactions that may have a material effect on the financial condition of that insured credit union, the Board may issue a temporary order requiring—

(i) the cessation of any activity or practice which gave rise, whether in whole or in part, to the incomplete or inaccurate state of the books or records; or (ii) affirmative action to restore such books or records to a complete and accurate state, until the completion of the proceedings under subsection (e)(1).

(B) Effective period.—Any temporary order issued under subparagraph

(A)—

(i) shall become effective upon service; and

(ii) unless set aside, limited, or suspended by a court in proceedings under paragraph (2), shall remain in effect and enforceable until the earlier of—

(I) the completion of the proceeding initiated under subsection (e)(1) in connection with the notice of charges; or

(II) the date the Board determines, by examination or otherwise, that the insured credit union's books and records are accurate and reflect the financial condition of the credit union.

(4) In the case of violation or threatened violation of, or failure to obey, a temporary cease-and-desist order, the Board may apply to the United States district court, or the United States court of any territory, within the jurisdiction of which the principal office of the credit union is located for an injunction to enforce such order, and, if the court shall determine that there has been such violation or threatened violation or failure to obey, it shall be the duty of the court to issue such injunction.

(g) Removal and Prohibition Authority.—

(1) Authority to issue order.— Whenever the Board determines that—

(A) any institution-affiliated party has, directly or indirectly—

(i) violated—

(I) any law or regulation;

(II) any cease-and-desist order which has become final;

(III) any condition imposed in writing by the Board in connection with any action on any application notice, or request by such credit union or institution-affiliated party; or

(IV) any written agreement between such credit union and the Board;

(ii) engaged or participated in any unsafe or unsound practice in connection with any insured credit union or business institution; or

(iii) committed or engaged in any act, omission, or practice which constitutes a breach of such party's fiduciary duty;

(B) by reason of the violation, practice, or breach described in any clause of subparagraph (A)—

(i) such insured credit union or business institution has suffered or will probably suffer financial loss or other damage;

(ii) the interests of the insured credit union's members have been or could be prejudiced; or

(iii) such party has received financial gain or other benefit by reason of such violation, practice or breach; and

(C) such violation, practice, or breach—

(i) involves personal dishonesty on the part of such party; or

(ii) demonstrates such party's unfitness to serve as a director or officer of, or to otherwise participate in the conduct of the affairs of, an insured credit union, the Board may serve upon such party a written notice of the Board's intention to remove such party from office or to prohibit any further participation, by such party, in any manner in the conduct of the affairs of any insured credit union.

(2) Specific violations.—

(A) In general.—Whenever the Board determines that—

(i) an institution-affiliated party has committed a violation of any provision of subchapter II of chapter 53 of Title 31, United States Code, unless such violation was inadvertent or unintentional;

(ii) an officer or director of an insured credit union has knowledge that an institution-affiliated party of the insured credit union has violated any such provision or any provision of law referred to in subsection (i)(1)(A)(ii); or

(iii) an officer or director of an insured credit union has committed any violation of the Depository Institution Management Interlocks Act, the Board may serve upon such party, officer, or director a written notice of the Board's intention to remove such officer or director from office.

(B) Factors to be considered.—In determining whether an officer or director should be removed as a result of the application of subparagraph (A)(ii), the Board shall consider whether the officer or director took appropriate action to stop, or to prevent the recurrence of, a violation described in such subparagraph.

(3) Suspension order.—

(A) Suspension or prohibition authorized.—If the Board serves written notice under paragraph (1) or (2) to any institution-affiliated party of the Board's intention to issue an order under such paragraph, the Board may suspend such party from office or prohibit such party from further participation in any manner in the conduct of the affairs of the institution, if the Board—

(i) determines that such action is necessary for the protection of the credit union or the interests of the credit union's members; and

(ii) serves such person with written notice of the suspension order.

(B) Effective period.—Any suspension order issued under subparagraph (A)—

(i) shall become effective upon service; and

(ii) unless a court issues a stay of such order under paragraph (6), shall remain in effect and enforceable until—

(I) the date the Board dismisses the charges contained in the notice served under paragraph (1) or (2) with respect to such party; or

(II) the effective date of an order issued by the Board to such person under paragraph (1) or (2).

(C) Copy of order.—If the Board issues a suspension order under subparagraph

(A) to any institution-affiliated party, the Board shall serve a copy of such order on any insured credit union with which such party is associated at the time such order is issued.

(4) A notice of intention to remove a director, committee member, officer, or other person from office or to prohibit his participation in the conduct of the affairs of an insured credit union, shall contain a statement of the facts constituting grounds therefor, and shall fix a time and place at which a hearing will be held thereon. Such hearing shall be fixed for a date not earlier

than thirty days nor later than sixty days after the date of service of such notice, unless an earlier or a later date is set by the Board at the request of (A) such director, committee member, or officer or other person, and for good cause shown, or (B) the Attorney General of the United States. Unless such director, committee member, officer, or other person shall appear at the hearing in person or by a duly authorized representative, he shall be deemed to have consented to the issuance of an order of such removal or prohibition. In the event of such consent, or if upon the record made at any such hearing the Board shall find that any of the grounds specified in such notice have been established, the Board may issue such orders of suspension or removal from office, or prohibition from participation in the conduct of the affairs of the credit union, as it may deem appropriate. Any such order shall become effective at the expiration of thirty days after service upon such credit union and the director, committee member, officer, or other person concerned (except in the case of an order issued upon consent, which shall become effective at the time specified therein). Such order shall remain effective and enforceable except to such extent as it is stayed, modified, terminated, or set aside by action of the Board or a reviewing court.

(5) Prohibition of certain specific activities.—Any person subject to an order issued under this subsection shall not—

(A) participate in any manner in the conduct of the affairs of any institution or agency specified in paragraph (7)(A);

(B) solicit, procure, transfer, attempt to transfer, vote, or attempt to vote any proxy, consent, or authorization with respect to any voting rights in any institution described in subparagraph (A);

(C) violate any voting agreement previously approved by the appropriate Federal banking agency; or

(D) vote for a director, or serve or act as an institution-affiliated party.

(6) Within ten days after any director, officer, committee member, or other person has been suspended from office and/or prohibited from participation in the conduct of the affairs of an insured credit union under paragraph (3) of this subsection, such director, officer, committee member, or other person may apply to the United States district court for the judicial district in which the principal office of the credit union is located, or the United States District Court for the District of Columbia, for a stay of such suspension and/or prohibition pending the completion of the administrative proceedings pursuant to the notice served upon such director, officer, committee member, or other person under paragraph (1) or (2) of this subsection, and such court shall have jurisdiction to stay such suspension and/or prohibition.

(7) Industrywide prohibition.—

(A) In general.—Except as provided in subparagraph (B), any person who, pursuant to an order issued under this subsection or subsection (i), has been removed or suspended from office in an insured credit union or prohibited from participating in the conduct of the affairs of an insured credit union may not, while such order is in effect, continue or commence to hold any office in, or participate in any manner in the conduct of the affairs of—

- (i) any insured depository institution;
- (ii) any institution treated as an insured bank under paragraph (3) or (4) of section 8(b) of the Federal Deposit Insurance Act, or as a savings association under section 8(b)(8) of such Act;
- (iii) any insured credit union;
- (iv) any institution chartered under the Farm Credit Act of 1971;
- (v) any appropriate Federal depository institution regulatory agency;
- (vi) the Federal Housing Finance Board and any Federal home loan bank; and
- (vii) the Resolution Trust Corporation.

(B) Exception if agency provides written consent.—If, on or after the date an order is issued under this subsection which removes or suspends from office any institution-affiliated party or prohibits such party from participating in the conduct of the affairs of an insured credit union, such party receives the written consent of—

- (i) the Board; and
- (ii) the appropriate Federal financial institutions regulatory agency of the institution described in any clause of subparagraph (A) with respect to which such party proposes to become an institution-affiliated party, subparagraph (A) shall, to the extent of such consent, cease to apply to such party with respect to the institution described in each written consent. If any person receives such a written consent from the Board, the Board shall publicly disclose such consent. If the agency referred to in clause (ii) grants such a written consent, such agency shall report such action to the Board and publicly disclose such consent.

(C) Violation of paragraph treated as violation of order.—Any violation of subparagraph (A) by any person who is subject to an order described in such subparagraph shall be treated as a violation of the order.

(D) Appropriate federal financial institutions regulatory agency defined.—

For purposes of this paragraph the term “appropriate Federal financial institutions regulatory agency” means—

- (i) the appropriate Federal banking agency, as provided in section 3(q) of the Federal Deposit Insurance Act;
- (ii) the Farm Credit Administration, in the case of an institution chartered under the Farm Credit Act of 1971;
- (iii) the National Credit Union Administration Board, in the case of an insured credit union (as defined in section 101(7) of the Federal Credit Union Act);
- (iv) the Secretary of the Treasury, in the case of the Federal Housing Finance Board and any Federal home loan bank; and
- (v) the Oversight Board, in the case of the Resolution Trust Corporation.

(E) Consultation between agencies.— The agencies referred to in clauses (i) and (ii) of subparagraph (B) shall consult with each other before providing any written consent described in subparagraph (B).

(F) Applicability.—This paragraph shall only apply to a person who is an individual, unless the Board specifically finds that it should apply to a corporation, firm, or other business enterprise.

(h)(1) The Board may, ex parte without notice, appoint itself or another (including, in the case of a State-chartered insured credit union, the State official having jurisdiction over the

credit union) as conservator and immediately take possession and control of the business and assets of any insured credit union in any case in which—

(A) the Board determines that such action is necessary to conserve the assets of any insured credit union or to protect the Fund or the interests of the members of such insured credit union;

(B) an insured credit union, by a resolution of its board of directors, consents to such an action by the Board;

(C) the Attorney General notifies the Board in writing that an insured credit union has been found guilty of a criminal offense under section 1956 or 1957 of Title 18, United States Code, or section 5322 of Title 31, United States Code.

(D) there is a willful violation of a cease-and-desist order which has become final;

(E) there is concealment of books, papers, records, or assets of the credit union or refusal to submit books, papers, records, or affairs of the credit union for inspection to any examiner or to any lawful agent of the Board;

(F) the credit union is significantly undercapitalized, as defined in section 216, and has no reasonable prospect of becoming adequately capitalized, as defined in section 216; or

(G) the credit union is critically undercapitalized, as defined in section 216; and

(2)(A) Except as provided in subparagraph (C) in the case of a State-chartered insured credit union, the authority conferred by paragraph (1) shall not be exercised without the written approval of the State official having jurisdiction over the State-chartered credit union that the grounds specified for such exercise exist.

(B) If such approval has not been received by the Board within 30 days of receipt of notice by the State that the Board has determined such grounds exist, and the Board has responded in writing to the State's written reasons, if any, for withholding approval, then the Board may proceed without State approval only by a unanimous vote of the Board.

(C) In the case of a State-chartered insured credit union, the authority conferred by subparagraphs (F) and (G) of paragraph (1) may not be exercised unless the Board has complied with section 216(l).

(3) Not later than ten days after the date on which the Board takes possession and control of the business and assets of an insured credit union pursuant to paragraph (1), such insured credit union may apply to the United States district court for the judicial district in which the principal office of such insured credit union is located or the United States District Court for the District of Columbia, for an order requiring the Board to show cause why it should not be enjoined from continuing such possession and control.

Except as provided in this paragraph, no court may take any action, except at the request of the Board by regulation or order, to restrain or affect the exercise of powers or functions of the Board as conservator.

(4) Except as provided in paragraph (3), in the case of a Federal credit union, the Board may maintain possession and control of the business and assets of such credit union and may operate such credit union until such time—

(A) as the Board shall permit such credit union to continue business subject to such terms and conditions as may be imposed by the Board; or

(B) as such credit union is liquidated in accordance with the provisions of section 207.

(5) Except as provided in paragraph (3), in the case of an insured State-chartered credit union, the Board may maintain possession and control of the business and assets of such credit union and may operate such credit union until such time—

(A) as the Board shall permit such credit union to continue business, subject to such terms and conditions as may be imposed by the Board;

(B) as the Board shall permit the transfer of possession and control of such credit union to any commission, board, or authority which has supervisory authority over such credit union and which is authorized by State law to operate such credit union; or

- (C) as such credit union is liquidated in accordance with the provisions of section 207.
- (6) The Board may appoint such agents as it considers necessary in order to assist the Board in carrying out its duties as a conservator under this subsection.
- (7) All expenses incurred by the Board in exercising its authority under this subsection with respect to any credit union shall be paid out of the assets of such credit union.
- (8) The conservator shall have all the powers of the members, the directors, the officers, and the committees of the credit union and shall be authorized to operate the credit union in its own name or to conserve its assets in the manner and to the extent authorized by the Board.
- (9) The authority granted by this subsection is in addition to all other authority granted to the Board under this Act.
- (i) Suspension, removal, and prohibition from participation orders in the case of certain criminal offenses. —
- (1) Suspension or prohibition authorized.—
- (A) In general.—Whenever any institution-affiliated party is charged in any information, indictment, or complaint, with the commission of or participation in—
- (i) a crime involving dishonesty or breach of trust which is punishable by imprisonment for a term exceeding one year under State or Federal law, or (ii) a criminal violation of section 1956, 1957, or 1960 of Title 18, United States Code, or section 5322 or 5324 of Title 31, United States Code, the Board may, if continued service or participation by such party may pose a threat to the interests of the credit union's members or may threaten to impair public confidence in any credit union, by written notice served upon such party, suspend such party from office or prohibit such party from further participation in any manner in the conduct of the affairs of any credit union.
- (B) Provisions applicable to notice.—
- (i) Copy.—A copy of any notice under subparagraph (A) shall also be served upon the credit union of which the subject of the order is, or most recently was, an institution-affiliated party.
- (ii) Effective period.—A suspension or prohibition under subparagraph
- (A) shall remain in effect until the information, indictment, or complaint referred to in such subparagraph is finally disposed of or until terminated by the Board.
- (C) Removal or prohibition.—
- (i) In general.—If a judgment of conviction or an agreement to enter a pre-trial diversion or other similar program is entered against an institution-affiliated party in connection with a crime described in subparagraph (A)(i), at such time as such judgment is not subject to further appellate review, the Board may, if continued service or participation by such party may pose a threat to the interests of any credit union's members or may threaten to impair public confidence in any credit union, issue and serve upon such party an order removing such party from office or prohibiting such party from further participation in any manner in the conduct of the affairs of any credit union without the prior written consent of the Board.
- (ii) Required for certain offenses.— In the case of a judgment of conviction or agreement against an institution-affiliated party in connection with a violation described in subparagraph (A)(ii), the Board shall issue and serve upon such party an order removing such party from office or prohibiting such party from further participation in any manner in the conduct of the affairs of the credit union without the prior written consent of the Board.
- (D) Provisions applicable to order.—
- (i) Copy.—A copy of any order under subparagraph (C) shall also be served upon the credit union of which the subject of the order is, or most recently was, an institution-affiliated party; whereupon such party (if a director or an officer) shall cease to be a director or officer of such credit union.

(ii) Effect of acquittal.—A finding of not guilty or other disposition of the charge shall not preclude the Board from instituting proceedings after such finding or disposition to remove such party from office or to prohibit further participation in credit union affairs, pursuant to paragraph (1), (2), or (3) of subsection (g) of this section.

(iii) Effective period.—Any notice of suspension or order of removal issued under this paragraph shall remain effective and outstanding until the completion of any hearing or appeal authorized under paragraph

(3) unless terminated by the Board.

(E) Continuation of authority. – The Board may issue an order under this paragraph with respect to an individual who is an institution-affiliated party at a credit union at the time of an offense described in subparagraph (A) without regard to –

(i) whether such individual is an institution-affiliated party at any credit union at the time the order is considered or issued by the Board; or

(ii) whether the credit union at which the individual was an institution-affiliated party at the time of the offense remains in existence at the time the order is considered or issued by the Board.

(2) If at any time, because of the suspension of one or more directors pursuant to this section, there shall be on the board of directors of a Federal credit union less than a quorum of directors not so suspended, all powers and functions vested in or exercisable by such board shall vest in and be exercisable by the director or directors on the board not so suspended, until such time as there shall be a quorum of the board of directors. In the event all of the directors of a Federal credit union are suspended pursuant to this section, the Board shall appoint persons to serve temporarily as directors in their place and stead pending the termination of such suspensions, or until such time as those who have been suspended cease to be directors of the credit union and their respective successors have been elected by the members at an annual or special meeting and have taken office. Directors appointed temporarily by the Board shall, within thirty days following their appointment, call a special meeting for the election of new directors, unless during the thirty-day period (A) the regular annual meeting is scheduled, or (B) the suspensions giving rise to the appointment of temporary directors are terminated.

(3) Within thirty days from service of any notice of suspension or order of removal issued pursuant to paragraph (1) of this subsection, the institution-affiliated party concerned may request in writing an opportunity to appear before the Board to show that the continued service to or participation in the conduct of the affairs of the credit union by such party does not, or is not likely to, pose a threat to the interests of the credit union's members or threaten to impair public confidence in the credit union.

Upon receipt of any such request, the Board shall fix a time (not more than thirty days after receipt of such request, unless extended at the request of such party and place at which such party may appear, personally or through counsel, before the Board or its designee to submit written materials (or, at the discretion of the Board, oral testimony) and oral argument. Within sixty days of such hearing, the Board shall notify such party whether the suspension or prohibition from participation in any manner in the conduct of the affairs of the credit union will be continued, terminated or otherwise modified, or whether the order removing such party from office or prohibiting such party from further participation in any manner in the conduct of the affairs of the credit union will be rescinded or otherwise modified. Such notification shall contain a statement of the basis for the Board's decision, if adverse to such party. The Board is authorized to prescribe such rules as may be necessary to effectuate the purposes of this subsection.

(j)(1) Any hearing provided for in this section (other than the hearing provided for in subsection (i)(3) of this section) shall be held in the Federal judicial district or in the territory in which the principal office of the credit union is located, unless the party afforded

the hearing consents to another place, and shall be conducted in accordance with the provisions of chapter 5 of title 5 of the United States Code. After such hearing, and within ninety days after the Board has notified the parties that the case has been submitted to it for final decision, it shall render its decision (which shall include findings of fact upon which its decision is predicated) and shall issue and serve upon each party to the proceeding an order or orders consistent with the provisions of this section. Judicial review of any such order shall be exclusively as provided in this subsection (j). Unless a petition for review is timely filed in a court of appeals of the United States, as provided in paragraph (2) of this subsection, and thereafter until the record in the proceeding has been filed as so provided, the Board may at any time, upon such notice and in such manner as it may deem proper, modify, terminate, or set aside any such order.

Upon such filing of the record, the Board may modify, terminate, or set aside any such order with permission of the court.

(2) Any party to any proceeding under paragraph (1) may obtain a review of any order served pursuant to paragraph (1) of this subsection (other than an order issued with the consent of the credit union or the institution-affiliated party concerned or an order issued under subsection (i)(1) of this section) by filing in the court of appeals of the United States for the circuit in which the principal office of the credit union is located, or in the United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, within thirty days after the date of service of such order, a written petition praying that the order of the Board be modified, terminated, or set aside. A copy of such petition shall be forthwith transmitted by the clerk of the court to the Board, and thereupon the Board shall file in the court the record in the proceeding, as provided in section 2112 of title 28, United States Code. Upon the filing of such petition, such court shall have jurisdiction which upon the filing of the record shall, except as provided in the last sentence of said paragraph (1), be exclusive, to affirm, modify, terminate, or set aside, in whole or in part, the order of the Board. Review of such proceedings shall be had as provided in chapter 7 of title 5, United States Code. The judgment and decree of the court shall be final, except that the same shall be subject to review by the Supreme Court upon certiorari, as provided in section 1254 of title 28, United States Code.

(3) The commencement of proceedings for judicial review under paragraph (2) of this subsection shall not, unless specifically ordered by the court, operate as a stay of any order issued by the Board.

(k)(1) The Board may in its discretion apply to the United States district court, or the United States court of any territory within the jurisdiction of which the principal office of the credit union is located, for the enforcement of any effective and outstanding notice or order issued under this section or section 216, and such courts shall have jurisdiction and power to order and require compliance therewith.

However, except as otherwise provided in this section or section 216, no court shall have jurisdiction to affect by injunction or otherwise the issuance or enforcement of any notice or order under this section or section

216 or to review, modify, suspend, terminate, or set aside any such notice or order.

(2) Civil money penalty.—

(A) First tier.—Any insured credit union which, and any institution-affiliated party who—

(i) violates any law or regulation;

(ii) violates any final order or temporary order issued pursuant to subsection (e), (f), (g), (i), or (q) or any final order under section 216;

(iii) violates any condition imposed in writing by the Board in connection with any action on any application, notice, or other request by the credit union or institution-affiliated party; or

(iv) violates any written agreement between such credit union and such agency, shall forfeit and pay a civil penalty of not more than \$5,000 for each day during which such violation continues.

(B) Second tier.—Notwithstanding subparagraph (A), any insured credit union which, and any institution-affiliated party who—

(i)(I) commits any violation described in any clause of subparagraph (A);

(II) recklessly engages in an unsafe or unsound practice in conducting the affairs of such credit union; or

(III) breaches any fiduciary duty;

(ii) which violation, practice, or breach—

(I) is part of a pattern of misconduct;

(II) causes or is likely to cause more than a minimal loss to such credit union; or

(III) results in pecuniary gain or other benefit to such party, shall forfeit and pay a civil penalty of not more than \$25,000 for each day during which such violation, practice, or breach continues.

(C) Third tier.—Notwithstanding subparagraphs (A) and (B), any insured credit union which, and any institution-affiliated party who—

(i) knowingly—

(I) commits any violation described in any clause of subparagraph (A);

(II) engages in any unsafe or unsound practice in conducting the affairs of such credit union; or

(III) breaches any fiduciary duty; and

(ii) knowingly or recklessly causes a substantial loss to such credit union or a substantial pecuniary gain or other benefit to such party by reason of such violation, practice, or breach, shall forfeit and pay a civil penalty in an amount not to exceed the applicable maximum amount determined under subparagraph (D) for each day during which such violation, practice, or breach continues.

(D) Maximum amounts of penalties for any violation described in subparagraph (C).—The maximum daily amount of any civil penalty which may be assessed pursuant to subparagraph (C) for any violation, practice, or breach described in such subparagraph is—

(i) in the case of any person other than an insured credit union, an amount to not exceed \$1,000,000; and

(ii) in the case of any insured credit union, an amount not to exceed the lesser of—

(I) \$1,000,000; or

(II) 1 percent of the total assets of such credit union.

(E) Assessment.—

(i) Written notice.—Any penalty imposed under subparagraph (A), (B), or (C) may be assessed and collected by the Board by written notice.

(ii) Finality of assessment.—If, with respect to any assessment under clause

(i), a hearing is not requested pursuant to subparagraph (H) within the period of time allowed under such subparagraph, the assessment shall constitute a final and unappealable order.

(F) Authority to modify or remit penalty.—The Board may compromise, modify, or remit any penalty which such agency may assess or had already assessed under subparagraph (A), (B), or (C).

(G) Mitigating factors.—In determining the amount of any penalty imposed under subparagraph (A), (B), or (C), the Board shall take into account the appropriateness of the penalty with respect to—

(i) the size of financial resources and good faith of the insured credit union or the person charged;

- (ii) the gravity of the violation;
- (iii) the history of previous violations; and
- (iv) such other matters as justice may require.

(H) Hearing.—The insured credit union or other person against whom any penalty is assessed under this paragraph shall be afforded an agency hearing if such institution or person submits a request for such hearing within 20 days after the issuance of the notice of assessment.

(I) Collection.—

- (i) Referral.—If any insured credit union or other person fails to pay an assessment after any penalty assessed under this paragraph has become final, the Board shall recover the amount assessed by action in the appropriate United States district court.
- (ii) Appropriateness of penalty not reviewable.—In any civil action under clause (i), the validity and appropriateness of the penalty shall not be subject to review.

(J) Disbursement.—All penalties collected under authority of this paragraph shall be deposited into the Treasury.

(K) Violate defined.—For purposes of this section, the term “violate” includes any action (alone or with another or others) for or toward causing, bringing about, participating in, counseling, or aiding or abetting a violation.

(L) Regulations.—The Board shall prescribe regulations establishing such procedures as may be necessary to carry out this paragraph.

(3) Notice under this section after separation from service.—The resignation, termination of employment or participation, or separation of an institution-affiliated party (including a separation caused by the closing of an insured credit union) shall not affect the jurisdiction and authority of the Board to issue any notice or order and proceed under this section against any such party, if such notice or order is served before the end of the 6-year period beginning on the date such party ceased to be such a party with respect to such credit union (whether such date occurs before, on, or after the date of the enactment of this paragraph).

(I) Criminal Penalty for Violation of Certain Orders.—Whoever—

- (1) under this Act, is suspended or removed from, or prohibited from participating in the affairs of any credit union described in section 206(g)(5); and
- (2) knowingly participates, directly or indirectly, in any manner (including by engaging in an activity specifically prohibited in such an order or in subsection (g)(5)) in the conduct of the affairs of such a credit union; shall be fined not more than \$1,000,000, imprisoned for not more than 5 years, or both.

(m) As used in this section (1) the terms “cease-and-desist order which has become final” and “order which has become final” means a cease-and-desist order, or an order issued by the Board with the consent of the credit union or the director, officer, committee member, or other person concerned, or with respect to which no petition for review of the action of the Board has been filed and perfected in a court of appeals as specified in paragraph (2) of subsection (j) of this section, or with respect to which the action of the court in which said petition is so filed is not subject to further review by the Supreme Court of the United States in proceedings provided for in said paragraph, or an order issued under subsection (i) of this section, and (2) the term “violation” includes without limitation any action (alone or with another or others) for or toward causing, bringing about, participating in, counseling, or aiding or abetting a violation.

(n) Any service required or authorized to be made by the Board under this section may be made by registered mail or in such other manner reasonably calculated to give actual notice as the Board may by regulation or otherwise provide. Copies of any notice or order served by the Board upon any State-chartered credit union or any director, officer, or committee member thereof or other person participating in the conduct of its affairs,

pursuant to the provisions of this section, shall also be sent to the commission, board, or authority, if any, having supervision of such credit union.

(o) In connection with any proceeding under subsection (e), (f)(1), or (g) of this section involving an insured State-chartered credit union or any institution-affiliated party, the Board shall provide the commission, board, or authority, if any, having supervision of such credit union, with notice of its intent to institute such a proceeding and the grounds thereof. Unless within such time as the Board deems appropriate in the light of the circumstances of the case (which time must be specified in the notice prescribed in the preceding sentence) satisfactory corrective action is effectuated by action of such commission, board, or authority, the Board may proceed as provided in this section. No credit union or other party who is the subject of any notice or order issued by the Board under this section shall have standing to raise the requirements of this subsection as ground for attacking the validity of any such notice or order.

(p) In the course of or in connection with any proceeding under this section or in connection with any claim for insured deposits or by examination or investigation under section 204(b), the Board, in conducting the proceeding, examination, or investigation or considering the claim for insured deposits, or any designated representative thereof, including any person designated to conduct any hearing under this section, shall have the power to administer oaths and affirmations, to take or cause to be taken depositions, and to issue, revoke, quash, or modify subpoenas and subpoenas duces tecum, and the Board is empowered to make rules and regulations with respect to any such proceedings, claims, examinations, or investigations. The attendance of witnesses and the production of documents provided for in this subsection may be required from any place in any State or in any territory or other place subject to the jurisdiction of the United States at any designated place where such proceeding is being conducted. Any party to proceedings under this section may apply to the United States District Court for the District of Columbia, or the United States district court for the judicial district or the United States court in any territory in which such proceeding is being conducted, or where the witness resides or carries on business, for enforcement of any subpoena or subpoena duces tecum issued pursuant to this subsection, and such courts shall have jurisdiction and power to order and require compliance therewith. Witnesses subpoenaed under this section shall be paid the same fees and mileage that are paid witnesses in the district courts of the United States. Any court having jurisdiction of any proceeding instituted under this section by an insured credit union or a director, officer, or committee member thereof may allow to any such party such reasonable expenses and attorneys' fees as it deems just and proper and such expenses and fees shall be paid by the credit union or from its assets.

(q) Compliance with Monetary Transaction Recordkeeping and Report Requirements.—

(1) Compliance procedures required.— The Board shall prescribe regulations requiring insured credit unions to establish and maintain procedures reasonably designed to assure and monitor the compliance of such credit unions with the requirements of subchapter II of chapter 53 of title 31, United States Code.

(2) Examinations of credit unions to include review of compliance procedures.—

(A) In general.—Each examination of an insured credit union by the Board shall include a review of the procedures required to be established and maintained under paragraph (1).

(B) Exam report requirement.— The report of examination shall describe any problem with the procedures maintained by the credit union.

(3) Order to comply with requirements.— If Board determines that an insured credit union—

(A) has failed to establish and maintain the procedures described in paragraph (1); or

(B) has failed to correct any problem with the procedures maintained by such credit union which was previously reported to the credit union by the Board, the Board shall issue an

order in the manner prescribed in subsection (e) or (f) requiring such credit union to cease and desist from its violation of this subsection or regulations prescribed under this subsection.

(r) Institution-affiliated Party Defined.— For purposes of this Act, the term “institutionaffiliated party” means—

(1) Any committee member, director, officer, or employee of, or agent for, an insured credit union;

(2) any consultant, joint venture partner, and any other person as determined by the Board (by regulation or on a case-by-case basis) who participates in the conduct of the affairs of an insured credit union; and

(3) any independent contractor (including any attorney, appraiser, or accountant) who knowingly or recklessly participates in—

(A) any violation of any law or regulation;

(B) any breach of fiduciary duty; or

(C) any unsafe or unsound practice, which caused or is likely to cause more than a minimal financial loss to, or a significant adverse effect on, the insured credit union.

(s) Public Disclosure of Agency Action.—

(1) In general.—The Board shall publish and make available to the public on a monthly basis—

(A) Any written agreement or other written statement for which a violation may be enforced by the Board, unless the Board, in its discretion, determines that publication would be contrary to the public interest;

(B) any final order issued with respect to any administrative enforcement proceeding initiated by the Board under this section or any other law; and

(C) any modification to or termination of any order or agreement made public pursuant to this paragraph.

(2) Hearings.—All hearings on the record with respect to any notice of charges issued by the Board shall be open to the public, unless the agency, in its discretion, determines that holding an open hearing would be contrary to the public interest.

(3) Reports to Congress.—A written report shall be made part of a determination not to hold a public hearing pursuant to paragraph (2) or not to publish a document pursuant to paragraph (1)(A). At the end of each calendar quarter, all such reports shall be transmitted to the Congress.

(4) Transcript of hearing.—A transcript that includes all testimony and other documentary evidence shall be prepared for all hearings commenced pursuant to subsection (k). A transcript of public hearings shall be made available to the public pursuant to section 552 of title 5, United States Code.

(5) Delay of publication under exceptional circumstances.—If the Board makes a determination in writing that the publication of a final order pursuant to paragraph (1)(B) would seriously threaten the safety and soundness of an insured depository institution, the agency may delay the publication of the document for a reasonable time.

(6) Documents filed under seal in public enforcement hearings.—The Board may file any document or part of a document under seal in any administrative enforcement hearing commenced by the agency if disclosure of the document would be contrary to the public interest. A written report shall be made part of any determination to withhold any part of a document from the transcript of the hearing required by paragraph (2).

(7) Retention of documents.—The Board shall keep and maintain a record, for a period of at least 6 years, of all documents described in paragraph (1) and all informal enforcement agreements and other supervisory actions and supporting documents issued with respect to or in connection with any administrative enforcement proceeding initiated by such agency under this section or any other laws.

(8) Disclosures to Congress.—No provision of this subsection may be construed to authorize the withholding, or to prohibit the disclosure, of any information to the Congress or any committee or subcommittee of the Congress.

(9) Preservation of records. —

(A) In general. — The Board may cause any and all records, papers, or documents kept by the Administration or in the possession or custody of the Administration to be —

(i) photographed or microphotographed or otherwise reproduced upon film; or

(ii) preserved in any electronic medium or format which is capable of —

(I) being read or scanned by computer; and

(II) being reproduced from such electronic medium or format by printing or any other form of reproduction of electronically stored data.

(B) Treatment as original records.— Any photographs, micrographs, or photographic film or copies thereof described in subparagraph (A)(i) or reproduction of electronically stored data described in subparagraph (A)(ii) shall be deemed to be an original record for all purposes, including introduction in evidence in all State and Federal courts or administrative agencies, and shall be admissible to prove any act, transaction, occurrence, or event therein recorded.

(C) Authority of the Administration.— Any photographs, microphotographs, or photographic film or copies thereof described in subparagraph (A)(i) or reproduction of electronically stored data described in subparagraph (A)(ii) shall be preserved in such manner as the Administration shall prescribe, and the original records, papers, or documents may be destroyed or otherwise disposed of as the Administration may direct.

(t) Regulation of Certain Forms of Benefits to Institution-Affiliated Parties.—

(1) Golden parachutes and indemnification payments.—The Board may prohibit or limit, by regulation or order, any golden parachute payment or indemnification payment.

(2) Factors to be taken into account.— The Board shall prescribe, by regulation, the factors to be considered by the Board in taking any action pursuant to paragraph (1) which may include such factors as the following:

(A) Whether there is a reasonable basis to believe that the institution-affiliated party has committed any fraudulent act or omission, breach of trust or fiduciary duty, or insider abuse with regard to the credit union that has had a material affect [sic] on the financial condition of the credit union.

(B) Whether there is a reasonable basis to believe that the institution-affiliated party is substantially responsible for the insolvency of the credit union, the appointment of a conservator or liquidating agent for the credit union, or the credit union's troubled condition (as defined in regulations prescribed by the Board pursuant to paragraph (4)(A)(ii)(III)).

(C) Whether there is a reasonable basis to believe that the institution-affiliated party has materially violated any applicable Federal or State banking law or regulation that has had a material effect on the financial condition of the credit union.

(D) Whether there is a reasonable basis to believe that the institution-affiliated party has violated or conspired to violate—

(i) section 215, 656, 657, 1005, 1006, 1007, 1014, 1032, or 1344 of title 18, United States Code; or

(ii) section 1341 or 1343 of such title affecting a financial institution.

(E) Whether the institution-affiliated party was in a position of managerial or fiduciary responsibility.

(F) The length of time the party was affiliated with the credit union and the degree to which—

(i) the payment reasonably reflects compensation earned over the period of employment; and

(ii) the compensation involved represents a reasonable payment for services rendered.

(3) Certain payments prohibited.— No credit union may prepay the salary or any liability or legal expense of any institution affiliated party if such payment is made—

(A) in contemplation of the insolvency of such credit union or after the commission of an act of insolvency; and

(B) with a view to, or has the result of—

(i) preventing the proper application of the assets of the credit union; or

(ii) preferring one creditor over another.

(4) Golden parachute payment defined.—For purposes of this subsection—

(A) In general.—The term “golden parachute payment” means any payment (or any agreement to make any payment) in the nature of compensation by any credit union for the benefit of any institution-affiliated party pursuant to an obligation of such credit union that—

(i) is contingent on the termination of such party’s affiliation with the credit union; and

(ii) is received on or after the date on which—

(I) the credit union is insolvent;

(II) any conservator or liquidating agent is appointed for such credit union;

(III) the Board determines that the credit union is in a troubled condition (as defined in regulations which the Board shall prescribe);

(IV) the credit union has been assigned a composite rating by the Board of 4 or 5 under the Uniform Financial Institutions Rating System (as applicable with respect to credit unions); or

(V) the credit union is subject to a proceeding initiated by the Board to terminate or suspend deposit insurance for such credit union.

(B) Certain payments in contemplation of an event.—Any payment which would be a golden parachute payment but for the fact that such payment was made before the date referred to in subparagraph (A)(ii) shall be treated as a golden parachute payment if the payment was made in contemplation of the occurrence of an event described in any subclause of such subparagraph.

(C) Certain payments not included.— The term “golden parachute payment” shall not include—

(i) any payment made pursuant to a retirement plan which is qualified (or is intended to be qualified) under section 401 of the Internal Revenue Code of 1986 or other nondiscriminatory retirement or severance benefit plan;

(ii) any payment made pursuant to a bona fide deferred compensation plan or arrangement which the Board determines, by regulation or order, to be permissible; or

(iii) any payment made by reason of the death or disability of an institution affiliated party.

(5) Other definitions.—For purposes of this subsection—

(A) Indemnification payment.— Subject to paragraph (6), the term “indemnification payment” means any payment (or any agreement to make any payment) by any credit union for the benefit of any person who is or was an institution affiliated party, to pay or reimburse such person for any liability or legal expense with regard to any administrative proceeding or civil action instituted by the Board which results in a final order under which such person—

(i) is assessed a civil money penalty;

(ii) is removed or prohibited from participating in conduct of the affairs of the credit union; or

(iii) is required to take any affirmative action described in section 206(e)(3) with respect to such credit union.

(B) Liability or legal expense.— The term “liability or legal expense” means—

- (i) any legal or other professional expense incurred in connection with any claim, proceeding, or action;
- (ii) the amount of, and any cost incurred in connection with, any settlement of any claim, proceeding, or action; and
- (iii) the amount of, and any cost incurred in connection with, any judgment or penalty imposed with respect to any claim, proceeding, or action.

(C) Payment.—The term “payment” includes—

- (i) any direct or indirect transfer of any funds or any asset; and
- (ii) any segregation of any funds or assets for the purpose of making, or pursuant to an agreement to make, any payment after the date on which such funds or assets are segregated, without regard to whether the obligation to make such payment is contingent on—

(I) the determination, after such date, of the liability for the payment of such amount; or

(II) the liquidation, after such date, of the amount of such payment.

(6) Certain commercial insurance coverage not treated as covered benefit payment.—No provision of this subsection shall be construed as prohibiting any credit union from purchasing any commercial insurance policy or fidelity bond, except that, subject to any requirement described in paragraph (5)(A)(iii), such insurance policy or bond shall not cover any legal or liability expense of the credit union which is described in paragraph (5)(A).

(u) Foreign Investigations.—

(1) Requesting assistance from foreign banking authorities.—In conducting any investigation, examination, or enforcement action under this Act, the Board may—

(A) request the assistance of any foreign banking authority; and

(B) maintain an office outside the United States.

(2) Providing assistance to foreign banking authorities.—

(A) In general.—The Board may, at the request of any foreign banking authority, assist such authority if such authority states that the requesting authority is conducting an investigation to determine whether any person has violated, is violating, or is about to violate any law or regulation relating to banking matters or currency transactions administered or enforced by the requesting authority.

(B) Investigation by Federal banking agency.—The Board may, in the Board’s discretion, investigate and collect information and evidence pertinent to a request for assistance under subparagraph (A). Any such investigation shall comply with the laws of the United States and the policies and procedures of the Board.

(C) Factors to consider.—In deciding whether to provide assistance under this paragraph, the Board shall consider—

(i) whether the requesting authority has agreed to provide reciprocal assistance with respect to banking matters within the jurisdiction of the Board or any appropriate Federal banking agency; and

(ii) whether compliance with the request would prejudice the public interest of the United States.

(D) Treatment of foreign banking authority.—For purposes of any Federal law or Board regulation relating to the collection or transfer of information by the Board or any appropriate Federal banking agency, the foreign banking authority shall be treated as another appropriate Federal banking agency.

(3) Rule of construction.—Paragraphs (1) and (2) shall not be construed to limit the authority of the Board or any other Federal agency to provide or receive assistance or information to or from any foreign authority with respect to any matter.

(v) Termination of Insurance for Money Laundering or Cash Transaction Reporting Offenses.—

(1) In general.—

(A) Conviction of Title 18 offenses.—

(i) Duty to notify.—If an insured State credit union has been convicted of any criminal offense under section 1956 or 1957 of Title 18, United States Code, the Attorney General shall provide to the Board a written notification of the conviction and shall include a certified copy of the order of conviction from the court rendering the decision.

(ii) Notice of termination.—After written notification from the Attorney General to the Board of such a conviction, the Board shall issue to such insured credit union a notice of its intention to terminate the insured status of the insured credit union and schedule a hearing on the matter, which shall be conducted as a termination hearing pursuant to subsection (b) of this section, except that no period for correction shall apply to a notice issued under this subparagraph.

(B) Conviction of Title 31 offenses.—If a credit union is convicted to any criminal offense under section 5322 or 5324 of Title 31, United States Code, after prior written notification from the Attorney General, the Board may initiate proceedings to terminate the insured status of such credit union in the manner described in subparagraph (A).

(C) Notice to state supervisor.—The Board shall simultaneously transmit a copy of any notice under this paragraph to the appropriate State financial institutions supervisor.

(2) Factors to be considered.—In determining whether to terminate insurance under paragraph (1), the Board shall take into account the following factors:

(A) The extent to which directors, committee members, or senior executive officers (as defined by the Board in regulations which the Board shall prescribe) of the credit union knew of, or were involved in, the commission of the money laundering offense of which the credit union was found guilty.

(B) The extent to which the offense occurred despite the existence of policies and procedures within the credit union which were designed to prevent the occurrence of any such offense.

(C) The extent to which the credit union has fully cooperated with law enforcement authorities with respect to the investigation of the money laundering offense of which the credit union was found guilty.

(D) The extent to which the credit union has implemented additional internal controls (since the commission of the offense of which the credit union was found guilty) to prevent the occurrence of any other money laundering offense.

(E) The extent to which the interest of the local community in having adequate deposit and credit services available would be threatened by the termination of insurance.

(3) Notice to state credit union supervisor and public.—When the order to terminate insured status initiated pursuant to this subsection is final, the Board shall—

(A) notify the commission, board, or authority (if any) having supervision of the credit union described in paragraph (1) at least 10 days prior to the effective date of the order of the termination of the insured status of such credit union; and

(B) publish notice of the termination of the insured status of the credit union.

(4) Temporary insurance of previously insured deposits.—Upon termination of the insured status of any State credit union pursuant to paragraph (1), the deposits of such credit union shall be treated in accordance with section 206(d)(2).

(5) Successor liability.—This subsection shall not apply to a successor to the interests of, or a person who acquires, an insured credit union that violated a provision of law described in paragraph (1), if the successor succeeds to the interests of the violator, or the acquisition is made, in good faith and not for purposes of evading this subsection or regulations prescribed under this subsection.

(w) One-year restrictions on federal examiners of insured credit unions. —

(1) In general.—In addition to other applicable restrictions set forth in title 18, United States Code, the penalties set forth in paragraph (5) of this subsection shall apply to any person who –

(A) was an officer or employee (including any special Government employee) of the Administration;

(B) served 2 or more months during the final 12 months of his or her employment with the Administration as a senior examiner (or a functionally equivalent position) of an insured credit union with continuing, broad responsibility for the examination (or inspection) of that insured credit union on behalf of the Administration; and

(C) within 1 year after the termination date of his or her service or employment with the Administration, knowingly accepts compensation as an employee, officer, director, or consultant from such insured credit union.

(2) Rule of construction. – For purposes of this subsection, a person shall be deemed to act as a consultant for an insured credit union only if such person directly works on matters for, or on behalf of, such insured credit union.

(3) Regulations.—

(A) In general.—The Board shall prescribe rules or regulations to administer and carry out this subsection, including rules, regulations, or guidelines to define the scope of persons referred to in paragraph (1)(B).

(B) Consultation.—In prescribing rules or regulations under this paragraph, the Board shall, to the extent it deems necessary, consult with the Federal banking agencies (as defined in section 3 of the Federal Deposit Insurance Act) on regulations issued by such agencies in carrying out section 10(k) of the Federal Deposit Insurance Act.

(4) Waiver.—The Board may grant a waiver, on a case by case basis, of the restriction imposed by this subsection to any officer or employee (including any special Government employee) of the Administration if the Chairman certifies in writing that granting the waiver would not affect the integrity of the supervisory program of the Administration.

(5) Penalties.—

(A) In general.—In addition to any other administrative, civil, or criminal remedy or penalty that may otherwise apply, whenever the Board determines that a person subject to paragraph (1) has become associated, in the manner described in paragraph (1)(C), with an insured credit union, the Board shall impose upon such person one or more of the following penalties:

(i) Industry-wide prohibition order.—The Board shall serve a written notice or order in accordance with and subject to the provisions of subsection (g)(4) for written notices or orders under paragraph (1) or (2) of subsection (g), upon such person of the intention of the Board –

(I) to remove such person from office or to prohibit such person from further participation in the conduct of the affairs of the insured credit union for a period of up to 5 years; and

(II) to prohibit any further participation by such person, in any manner, in the conduct of the affairs of any insured credit union for a period of up to 5 years.

(i) Civil monetary penalty. – The Board may, in an administrative proceeding or civil action in an appropriate United States district court, impose on such person a civil monetary penalty of not more than \$250,000. Any administrative proceeding under this clause shall be conducted in accordance with subsection (k).

In lieu of action by the Board under this clause, the Attorney General of the United States may bring a civil action under this clause in the appropriate United States district court.

(B) Scope of prohibition order.— Any person subject to an order issued under this subparagraph (A)(i) shall be subject to paragraphs (5) and (7) of subsection (g) in the same manner and to the same extent as a person subject to an order issued under subsection (g).

§ 1786a § 206A

Section 206A, addressing regulation and examination of credit union organizations and service providers, expired effective December 31, 2001.

§ 1787 § 207

Payment of insurance.—(a)(1)(A) Upon its finding that a Federal credit union insured under this title is bankrupt or insolvent, the Board shall close such credit union for liquidation and appoint itself liquidating agent therefor.

(B) Not later than 10 days after the date on which the Board closes a credit union for liquidation pursuant to paragraph (1), or accepts appointment as liquidating agent pursuant to subsection (b), such insured credit union may apply to the United States district court for the judicial district in which the principal office of such insured credit union is located or the United States District Court for the District of Columbia, for an order requiring the Board to show cause why it should not be prohibited from continuing such liquidation. Except as otherwise provided in this subparagraph, no court may take any action for or toward the removal of any liquidating agent or, except at the instance of the Board, restrain or affect the exercise of powers or functions of a liquidating agent.

(2) Notwithstanding any other provision of law, the Board as liquidating agent of a closed Federal credit union insured under this title shall not be required to furnish bond and shall have the right to appoint an agent or agents to assist it in its duties as such liquidating agent. All fees, compensation, and expenses of liquidation and administration thereof shall be fixed by the Board and may be paid by it out of funds coming into its possessions as such liquidating agent.

(3) Liquidation to facilitate prompt corrective action.—The Board may close any credit union for liquidation, and appoint itself or another (including, in the case of a State-chartered insured credit union, the State official having jurisdiction over the credit union) as liquidating agent of that credit union, if—

(A) the Board determines that—

(i) the credit union is significantly undercapitalized, as defined in section 216, and has no reasonable prospect of becoming adequately capitalized, as defined in section 216; or

(ii) the credit union is critically undercapitalized, as defined in section 216;

and

(B) in the case of a State-chartered insured credit union, the Board has complied with section 216(l).

(b) Powers and Duties of Board as Conservator or Liquidating Agent.—

(1) Rulemaking authority of Board.— The Board may prescribe such regulations as the Board determines to be appropriate regarding the conduct of the Board as conservator or liquidating agent.

(2) General Powers.—

(A) Successor to credit union.— The Board shall, as conservator or liquidating agent, and by operation of law, succeed to—

(i) all rights, titles, powers, and privileges of the credit union, and of any member, accountholder, officer, or director of such credit union with respect to the credit union and the assets of the credit union; and

(ii) title to the books, records, and assets of any previous conservator or other legal custodian of such credit union.

(B) Operate the credit union.— The Board may, as conservator or liquidating agent—

(i) take over the assets of and operate the credit union with all the powers of the members or shareholders, the directors, and the officers of the credit union and shall be authorized to conduct all business of the credit union;

- (ii) collect all obligations and money due the credit union;
 - (iii) perform all functions of the credit union in the name of the credit union which is consistent with the appointment as conservator or liquidating agent; and
 - (iv) preserve and conserve the assets and property of such credit union.
- (C) Functions of credit union's officers, directors, and shareholders.— The Board may, by regulation or order, provide for the exercise of any function by any member or stockholder, director, or officer of any credit union for which the Board has been appointed conservator or liquidating agent.
- (D) Powers as conservator.—The Board may, as conservator, take such action as may be—
- (i) necessary to put the credit union in a sound and solvent condition; and
 - (ii) appropriate to carry on the business of the credit union and preserve and conserve the assets and property of the credit union.
- (E) Additional powers as liquidating agent.—The Board may, as liquidating agent, place the credit union in liquidation and proceed to realize upon the assets of the credit union, having due regard to the conditions of credit in the locality.
- (F) Payment of valid obligations.—The Board, as conservator or liquidating agent, shall pay all valid obligations of the credit union in accordance with the prescriptions and limitations of this Act.
- (G) Attachment of assets and injunctive relief.—Subject to subparagraph (H), any court of competent jurisdiction may, at the request of the Board (in the Board's capacity as conservator or liquidating agent for any insured credit union or in the Board's corporate capacity in the exercise of any authority under section 207), issue an order in accordance with Rule 65 of the Federal Rules of Civil Procedure, including an order placing the assets of any person designated by the Board under the control of the court and appointing a trustee to hold such assets.
- (H) Standards.—
- (i) Showing.—Rule 65 of the Federal Rules of Civil Procedure shall apply with respect to any proceeding under subparagraph (G) without regard to the requirement of such rule that the applicant show that the injury, loss, or damage is irreparable and immediate.
 - (ii) State proceeding.—If, in the case of any proceeding in a State court, the court determines that rules of civil procedure available under the laws of such State provide substantially similar protections to such party's right to due process as Rule 65 (as modified with respect to such proceeding by clause (i)), the relief sought by the Board pursuant to subparagraph (G) may be requested under the laws of such State.
- (I) Subpoena authority.—
- (i) In general.—The Board may, as conservator or liquidating agent and for purposes of carrying out any power, authority, or duty with respect to an insured credit union (including determining any claim against the credit union and determining and realizing upon any asset of any person in the course of collecting money due the credit union), exercise any power established under section 206(p), and the provisions of such section shall apply with respect to the exercise of any such power under this subparagraph in the same manner as such provisions apply under such section.
 - (ii) Authority of board.—A subpoena or subpoena duces tecum may be issued under clause (i) only by, or with the written approval of, the Board or their designees.
 - (iii) Rule of construction.—This subsection shall not be construed as limiting any rights that the Board, in any capacity, might otherwise have under section 206(p).
- (J) Incidental powers.—The Board may, as conservator or liquidating agent—
- (i) exercise all powers and authorities specifically granted to conservators or liquidating agents, respectively, under this Act and such incidental powers as shall be necessary to carry out such powers; and

(ii) take any action authorized by this Act, which the Board determines is in the best interests of the credit union, its accountholders, or the Board.

(K) Exemption from criminal prosecution.—The Administration shall be exempt from all prosecution by the United States or any State, county, municipality, or local authority for any criminal offense arising under Federal, State, county, municipal, or local law, which was allegedly committed by a credit union, or persons acting on behalf of a credit union, prior to the appointment of the Administration as liquidating agent.

(3) Authority of liquidating agent to determine claims.—

(A) In general.—The Board may, as liquidating agent, determine claims in accordance with the requirements of this subsection and regulations prescribed under paragraph (4).

(B) Notice requirements.—The liquidating agent, in any case involving the liquidation or winding up of the affairs of a closed credit union, shall—

(i) promptly publish a notice to the credit union's creditors to present their claims, together with proof, to the liquidating agent by a date specified in the notice which shall be not less than 90 days after the publication of such notice; and

(ii) republish such notice approximately 1 month and 2 months, respectively, after the publication under clause (i).

(C) Mailing required.—The liquidating agent shall mail a notice similar to the notice published under subparagraph (B)(i) at the time of such publication to any creditor shown on the credit union's books—

(i) at the creditor's last address appearing in such books; or

(ii) upon discovery of the name and address of a claimant not appearing on the credit union's books within 30 days after the discovery of such name and address.

(4) Rulemaking authority relating to determination of claims.—The Board may prescribe regulations regarding the allowance or disallowance of claims by the liquidating agent and providing for administrative determination of claims and review of such determination.

(5) Procedures for determination of claims.—

(A) Determination period.—

(i) In general.—Before the end of the 180-day period beginning on the date any claim against a credit union is filed with the Board as liquidating agent, the Board shall determine whether to allow or disallow the claim and shall notify the claimant of any determination with respect to such claim.

(ii) Extension of time.—The period described in clause (i) may be extended by a written agreement between the claimant and the Board.

(iii) Mailing of notice sufficient.—The requirements of clause (i) shall be deemed to be satisfied if the notice of any determination with respect to any claim is mailed to the last address of the claimant which appears—

(I) on the credit union's books;

(II) in the claim filed by the claimant; or

(III) in documents submitted in proof of the claim.

(iv) Contents of notice of disallowance.—If any claim filed under clause (i) is disallowed, the notice to the claimant shall contain—

(I) a statement of each reason for the disallowance; and

(II) the procedures available for obtaining agency review of the determination to disallow the claim or judicial determination of the claim.

(B) Allowance of proven claims.—The liquidating agent shall allow any claim received on or before the date specified in the notice published under paragraph (3)(B)(i) by the liquidating agent from any claimant which is approved to the satisfaction of the liquidating agent.

(C) Disallowance of claims filed after end of filing period.—

(i) In general.—Except as provided in clause (ii), claims filed after the date specified in the notice published under paragraph (3)(B)(i) shall be disallowed and such disallowance shall be final.

(ii) Certain exceptions.—Clause

(i) shall not apply with respect to any claim filed by any claimant after the date specified in the notice published under paragraph

(3)(B)(i) and such claim may be considered by the liquidating agent if—

(I) the claimant did not receive notice of the appointment of the liquidating agent in time to file such claim before such date; and

(II) such claim is filed in time to permit payment of such claim.

(D) Authority to disallow claims.—The liquidating agent may disallow any portion of any claim by a creditor or claim of security, preference, or priority which is not proved to the satisfaction of the liquidating agent.

(E) No judicial review of determination pursuant to subparagraph

(D).—No court may review the Board's determination pursuant to subparagraph (D) to disallow a claim.

(F) Legal effect of filing.—

(i) Statute of limitation tolled.—For purposes of any applicable statute of limitations, the filing of a claim with the liquidating agent shall constitute a commencement of an action.

(ii) No prejudice to other actions.— Subject to paragraph (12), the filing of a claim with the liquidating agent shall not prejudice any right of the claimant to continue any action which was filed before the appointment of the liquidating agent.

(6) Provision for agency review or judicial determination of claims.—

(A) In general.—Before the end of the 60-day period beginning on the earlier of—

(i) the end of the period described in paragraph (5)(A)(i) with respect to any claim against a credit union for which the Board is liquidating agent; or

(ii) the date of any notice of disallowance of such claim pursuant to paragraph (5)(A)(i), the claimant may request administrative review of the claim in accordance with subparagraph (A) or (B) of paragraph (7) or file suit on such claim (or continue an action commenced before the appointment of the liquidating agent) in the district or territorial court of the United States for the district within which the credit union's principal place of business is located or the United States District Court for the District of Columbia (and such court shall have jurisdiction to hear such claim).

(B) Statute of limitations.—If any claimant fails to—

(i) request administrative review of any claim in accordance with subparagraph (A) or (B) of paragraph (7); or

(ii) file suit on such claim (or continue an action commenced before the appointment of the liquidating agent), before the end of the 60-day period described in subparagraph (A), the claim shall be deemed to be disallowed (other than any portion of such claim which was allowed by the liquidating agent) as of the end of such period, such disallowance shall be final, and the claimant shall have no further rights or remedies with respect to such claim.

(7) Review of claims.—

(A) Administrative hearing.—If any claimant requests review under this subparagraph in lieu of filing or continuing any action under paragraph (6) and the Board agrees to such request, the Board shall consider the claim after opportunity for hearing on the record. The final determination of the Board with respect to such claim shall be subject to judicial review under chapter 7 of title 5, United States Code.

(B) Other review procedures.—

(i) In general.—The Board shall also establish such alternative dispute resolution processes as may be appropriate for the resolution of claims filed under paragraph (5)(A)(i).

(ii) Criteria.—In establishing alternative dispute resolution processes, the Board shall strive for procedures which are expeditious, fair, independent, and low cost.

(iii) Voluntary binding or nonbinding procedures.—The Board may establish both binding and nonbinding processes, which may be conducted by any government or private party, but all parties, including the claimant and the Board, must agree to the use of the process in a particular case.

(iv) Consideration of incentives.— The Board shall seek to develop incentives for claimants to participate in the alternative dispute resolution process.

(8) Expedited determination of claims.—

(A) Establishment required.—The Board shall establish a procedure for expedited relief outside of the routine claims process established under paragraph (5) for claimants who—

(i) allege the existence of legally valid and enforceable or perfected security interests in assets of any credit union for which the Board has been appointed liquidating agent; and

(ii) allege that irreparable injury will occur if the routine claims procedure is followed.

(B) Determination period.—Before the end of the 90-day period beginning on the date any claim is filed in accordance with the procedures established pursuant to subparagraph (A), the Board shall—

(i) determine—

(I) whether to allow or disallow such claim; or

(II) whether such claim should be determined pursuant to the procedures established pursuant to paragraph (5); or

(ii) notify the claimant of the determination, and if the claim is disallowed, a statement of each reason for the disallowance and the procedure for obtaining agency review or judicial determination.

(C) Period for filing or renewing suit.—Any claimant who files a request for expedited relief shall be permitted to file a suit, or to continue a suit filed before the appointment of the liquidating agent, seeking a determination of the claimant's rights with respect to such security interest after the earlier of—

(i) the end of the 90-day period beginning on the date of the filing of a request for expedited relief; or

(ii) the date the Board denies the claim.

(D) Statute of limitations.—If an action described in subparagraph (C) is not filed, or the motion to renew a previously filed suit is not made, before the end of the 30-day period beginning on the date on which such action or motion may be filed in accordance with subparagraph (B), the claim shall be deemed to be disallowed as of the end of such period (other than any portion of such claim which was allowed by the liquidating agent), such disallowance shall be final, and the claimant shall have no further rights or remedies with respect to such claim.

(E) Legal effect of filing.—

(i) Statute of limitation tolled.—For purposes of any applicable statute of limitations, the filing of a claim with the liquidating agent shall constitute a commencement of an action.

(ii) No prejudice to other actions.— Subject to paragraph (12), the filing of a claim with the liquidating agent shall not prejudice any right of the claimant to continue any action which was filed before the appointment of the liquidating agent.

(9) Agreement as basis of claim.—

(A) Requirements.—Except as provided in subparagraph (B), any agreement which does not meet the requirements set forth in section 208(a)(3) shall not form the basis of, or substantially comprise, a claim against the liquidating agent or the Board.

(B) Exception to contemporaneous execution requirement.—Notwithstanding section 208(a)(3), any agreement between a Federal home loan bank or Federal Reserve bank and any insured credit union which was executed before the extension of credit by such

bank to such credit union shall be treated as having been executed contemporaneously with such extension of credit for purposes of subparagraph (A).

(10) Payment of Claims.—

(A) In general.—The liquidating agent may, in the liquidating agent's discretion and to the extent funds are available, pay creditor claims which are allowed by the liquidating agent, approved by the Board pursuant to a final determination pursuant to paragraph (7) or (8), or determined by the final judgment of any court of competent jurisdiction in such manner and amounts as are authorized under this Act.

(B) Payment of dividends on claims.— The liquidating agent may, in the liquidating agent's sole discretion, pay dividends on proved claims at any time, and no liability shall attach to the Board (in such Board's corporate capacity or as liquidating agent), by reason of any such payment, for failure to pay dividends to a claimant whose claim is not proved at the time of any such payment.

(11) Distribution of assets.—

(A) Subrogated claims; claims of uninsured accountholders and other creditors.—The liquidating agent shall—

(i) retain for the account of the Board such portion of the amounts realized from any liquidation as the Board may be entitled to receive in connection with the subrogation of the claims of accountholders; and

(ii) pay to accountholders and other creditors the net amounts available for distribution to them.

(B) Distribution to shareholders of amounts remaining after payment of all other claims and expenses.—In any case in which funds remain after all accountholders, creditors, other claimants, and administrative expenses are paid, the liquidating agent shall distribute such funds to the credit union's shareholders or members together with the accounting report required under paragraph (14)(C).

(12) Suspension of legal actions.—

(A) In general.—After the appointment of a conservator or liquidating agent for an insured credit union, the conservator or liquidating agent may request a stay for a period not to exceed—

(i) 45 days, in the case of any conservator; and

(ii) 90 days, in the case of any liquidating agent, in any judicial action or proceeding to which such credit union is or becomes a party.

(B) Grant of stay by all courts required.—Upon receipt of a request by any conservator or liquidating agent pursuant to subparagraph (A) for a stay of any judicial action or proceeding in any court with jurisdiction of such action or proceeding, the court shall grant such stay as to all parties.

(13) Additional rights and duties.—

(A) Prior final adjudication.—The Board shall abide by any final unappealable judgment of any court of competent jurisdiction which was rendered before the appointment of the Board as conservator or liquidating agent.

(B) Rights and remedies of conservator or liquidating agent.—In the event of any appealable judgment, the Board as conservator or liquidating agent shall—

(i) have all the rights and remedies available to the credit union (before the appointment of such conservator or liquidating agent) and the Board in its corporate capacity, including removal to Federal court and all appellate rights; and

(ii) not be required to post any bond in order to pursue such remedies.

(C) No attachment or execution.— No attachment or execution may issue by any court upon assets in the possession of the liquidating agent.

(D) Limitation on judicial review.— Except as otherwise provided in this subsection, no court shall have jurisdiction over—

(i) any claim or action for payment from, or any action seeking a determination of rights with respect to, the assets of any credit union for which the Board has been appointed liquidating agent, including assets which the Board may acquire from itself as such liquidating agent; or

(ii) any claim relating to any act or omission of such credit union or the Board as liquidating agent.

(14) Statute of limitations for actions brought by conservator liquidating agent.—

(A) In general.—Notwithstanding any provision of any contract, the applicable statute of limitations with regard to any action brought by the Board as conservator or liquidating agent shall be—

(i) in the case of any contract claim, the longer of—

(I) the 6-year period beginning on the date the claim accrues; or

(II) the period applicable under State law; and

(ii) in the case of any tort claim, the longer of—

(I) the 3-year period beginning on the date the claim accrues; or

(II) the period applicable under State law.

(B) Determination of the date on which a claim accrues.—For purposes of subparagraph

(A), the date on which the statute of limitation begins to run on any claim described in such subparagraph shall be the later of—

(i) the date of the appointment of the Board as conservator or liquidating agent; or

(ii) the date on which the cause of action accrues.

(15) Accounting and recordkeeping requirements.—

(A) In general.—The Board as conservator or liquidating agent shall, consistent with the accounting and reporting practices and procedures established by the Board, maintain a full accounting of each conservatorship and liquidation or other disposition of credit unions in default.

(B) Annual accounting or report.— With respect to each conservatorship or liquidation to which the Board was appointed, the Board shall make an annual accounting or report, as appropriate, available to the Comptroller General of the United States or, in the case of a State chartered credit union, the authority which appointed the Board as conservator or liquidating agent.

(C) Availability of reports.—Any report prepared pursuant to subparagraph (B) shall be made available by the Board upon request to any shareholder of the credit union for which the Board was appointed conservator or liquidating agent or any other member of the public.

(D) Recordkeeping requirement.—

(i) In general.— except as provided in clause (ii), after the end of the 6- year period beginning on the date the Board is appointed as liquidating agent of an insured credit union, the Board may destroy any records of such credit union which the Board, in the Board's discretion, determines to be unnecessary unless directed not to do so by a court of competent jurisdiction or governmental agency, or prohibited by law.

(ii) Old records.— Notwithstanding clause (i) the Board may destroy records of an insured credit union which are at least 10 years old as of the date on which the Board is appointed as liquidating agent of such credit union in accordance with clause (i) at any time after such appointment is final, without regard to the 6-year period of limitation contained in clause (i).

(16) Fraudulent Transfers.—

(A) In general.—The Board, as conservator or liquidating agent for any insured credit union may avoid a transfer of any interest of an institution-affiliated party, or any person who the Board determines is a debtor of the institution, in property, or any obligation incurred by such party or person, that was made within 5 years of the date on which the

Board becomes conservator or liquidating agent if such party or person voluntarily or involuntarily made such transfer or incurred such liability with the intent to hinder, delay, or defraud the insured credit union or the Board.

(B) Right of recovery.—To the extent a transfer is avoided under subparagraph (A), the Board may recover, for the benefit of the insured credit union, the property transferred, or, if a court so orders, the value of such property (at the time of such transfer) from—

(i) the initial transferee of such transfer or the institution-affiliated party or person for whose benefit such transfer was made; or

(ii) any immediate or mediate transferee of any such initial transferee.

(C) Rights of transferee or obligee.— The Board may not recover under subparagraph (B) from—

(i) any transferee that takes for value, including satisfaction or securing of a present or antecedent debt, in good faith; or

(ii) any immediate or mediate good faith transferee of such transferee.

(D) Rights under this paragraph.— The rights of the Board under this paragraph shall be superior to any rights of a trustee or any other party (other than any party which is a Federal agency) under title 11, United States Code.

(c) Provisions Relating to Contracts Entered into Before Appointment of Conservator or Liquidating Agent.—

(1) Authority to repudiate contracts.— In addition to any other rights a conservator or liquidating agent may have, the conservator or liquidating agent for any insured credit union may disaffirm or repudiate any contract or lease—

(A) to which such credit union is a party;

(B) the performance of which the conservator or liquidating agent, in the conservator's or liquidating agent's discretion, determines to be burdensome; and

(C) the disaffirmance or repudiation of which the conservator or liquidating agent determines, in the conservator's or liquidating agent's discretion, will promote the orderly administration of the credit union's affairs.

(2) Timing of repudiation.—The conservator or liquidating agent appointed for any insured credit union shall determine whether or not to exercise the rights of repudiation under this subsection within a reasonable period following such appointment.

(3) Claims for damages for repudiation.—

(A) In general.—Except as otherwise provided in subparagraph (C) and paragraphs (4), (5), and (6), the liability of the conservator or liquidating agent for the disaffirmance or repudiation of any contract pursuant to paragraph (1) shall be—

(i) limited to actual direct compensatory damages; and

(ii) determined as of—

(I) the date of the appointment of the conservator or liquidating agent; or

(II) in the case of any contract or agreement referred to in paragraph (8), the date of the disaffirmance or repudiation of such contract or agreement.

(B) No liability for other damages.— For purposes of subparagraph (A), the term “actual direct compensatory damages” does not include—

(i) punitive or exemplary damages;

(ii) damages for lost profits or opportunity; or

(iii) damages for pain and suffering.

(C) Measure of damages for repudiation of financial contracts.—In the case of any qualified financial contract or agreement to which paragraph (8) applies, compensatory damages shall be—

(i) deemed to include normal and reasonable costs of cover or other reasonable measures of damages utilized in the industries for such contract and agreement claims; and

(ii) paid in accordance with this subsection and subsection (f) except as otherwise specified provided in this section.

(4) Leases under which the credit union is the lessee.—

(A) In general.—If the conservator or liquidating agent disaffirms or repudiates a lease under which the credit union was the lessee, the conservator or liquidating agent shall not be liable for any damages (other than damages determined pursuant to subparagraph (B)) for the disaffirmance or repudiation of such lease.

(B) Payments of rent.— Notwithstanding subparagraph (A), the lessor under a lease to which such subparagraph applies shall—

(i) be entitled to the contractual rent accruing before the later of the date—

(I) the notice of disaffirmance or repudiation is mailed; or

(II) the disaffirmance or repudiation becomes effective, unless the lessor is in default or breach of the terms of the lease;

(ii) have no claim for damages under any acceleration clause or other penalty provision in the lease; and

(iii) have a claim for any unpaid rent, subject to all appropriate offsets and defenses, due as of the date of the appointment which shall be paid in accordance with this subsection and subsection (b).

(5) Leases under which the credit union is the lessor.—

(A) In general.—If the conservator or liquidating agent repudiates an unexpired written lease of real property of the credit union under which the credit union is the lessor and the lessee is not, as of the date of such repudiation, in default, the lessee under such lease may either—

(i) treat the lease as terminated by such repudiation; or

(ii) remain in possession of the leasehold interest for the balance of the term of the lease unless the lessee defaults under the terms of the lease after the date of such repudiation.

(B) Provisions applicable to lessee remaining in possession.—If any lessee under a lease described in subparagraph (A) remains in possession of a leasehold interest pursuant to clause (ii) of such subparagraph—

(i) the lessee—

(I) shall continue to pay the contractual rent pursuant to the terms of the lease after the date of the repudiation of such lease; and

(II) may offset against any rent payment which accrues after the date of the repudiation of the lease, any damages which accrue after such date due to the nonperformance of any obligation of the credit union under the lease after such date; and

(ii) the conservator or liquidating agent shall not be liable to the lessee for any damages arising after such date as a result of the repudiation other than the amount of any offset allowed under clause (i)(II).

(6) Contracts for the sale of real property.—

(A) In general.—If the conservator or liquidating agent repudiates any contract (which meets the requirements of each paragraph of section 208(a)(3)) for the sale of real property and the purchaser of such real property under such contract is in possession and is not, as of the date of such repudiation, in default, such purchaser may either—

(i) treat the contract as terminated by such repudiation; or

(ii) remain in possession of such real property.

(B) Provisions applicable to purchaser remaining in possession.—If any purchaser of real property under any contract described in subparagraph (A) remains in possession of such property pursuant to clause (ii) of such subparagraph—

(i) the purchaser—

(I) shall continue to make all payments due under the contract after the date of the repudiation of the contract; and

(II) may offset against any such payments, any damages which accrue after such date due to the nonperformance (after such date) of any obligation of the credit union under the contract; and

(ii) the conservator or liquidating agent shall—

(I) not be liable to the purchaser for any damages arising after such date as a result of the repudiation other than the amount of any offset allowed under clause (i)(II);

(II) deliver title to the purchaser in accordance with the provisions of the contract; and

(III) have no obligation under the contract other than the performance required under subclause (II).

(C) Assignment and sale allowed.—

(i) In general.—No provision of this paragraph shall be construed as limiting the right of the conservator or liquidating agent to assign the contract described in subparagraph (A) and sell the property subject to the contract and the provisions of this paragraph.

(ii) No liability after assignment and sale.—If an assignment and sale described in clause (i) is consummated, the conservator or liquidating agent shall have no further liability under the contract described in subparagraph (A) or with respect to the real property which was the subject of such contract.

(7) Provisions applicable to service contracts.—

(A) Services performed before appointment.—In the case of any contract for services between any person and any insured credit union for which the Board has been appointed conservator or liquidating agent, any claim of such person for services performed before the appointment of the conservator or the liquidating agent shall be—

(i) a claim to be paid in accordance with subsection (b); and

(ii) deemed to have arisen as of the date the conservator or liquidating agent was appointed.

(B) Services performed after appointment and prior to repudiation.— If, in the case of any contract for services described in subparagraph (A), the conservator or liquidating agent accepts performance by the other person before the conservator or liquidating agent makes any determination to exercise the right of repudiation of such contract under this section—

(i) the other party shall be paid under the terms of the contract for the services performed; and

(ii) the amount of such payment shall be treated as an administrative expense of the conservatorship or liquidation.

(C) Acceptance of performance no bar to subsequent repudiation.—The acceptance by any conservator or liquidating agent of services referred to in subparagraph (B) in connection with a contract described in such subparagraph shall not affect the right of the conservator or liquidating agent to repudiate such contract under this section at any time after such performance.

(8) Certain qualified financial contracts.—

(A) Rights of parties to contracts.—Subject to paragraphs (9) and (10) of this subsection and notwithstanding any other provision of this chapter (other than subsection (b)(9) of this section and section 1788(a)(3) of this title), any other Federal law, or the law of any State, no person shall be stayed or prohibited from exercising—

(i) any right such person has to cause the termination, liquidation, or acceleration of any qualified financial contract with an insured credit union which arises upon the appointment of the Board as liquidating agent for such credit union at any time after such appointment;

(ii) any right under any security agreement or arrangement or other credit enhancement related to 1 or more qualified financial contracts described in clause (i);

(iii) any right to offset or net out any termination value, payment amount, or other transfer obligation arising under or in connection with 1 or more contracts and agreements described in clause (i), including any master agreement for such contracts or agreements.

(B) Applicability of other provisions.— Subsection (b)(12) shall apply in the case of any judicial action or proceeding brought against any liquidating agent referred to in subparagraph (A), or the credit union for which such liquidating agent was appointed, by any party to a contract or agreement described in subparagraph (A)(i) with such credit union.

(C) Certain transfers not avoidable.—

(i) In general.—Notwithstanding paragraph (11), section 5242 of the Revised Statutes of the United States [12 U.S.C.A. § 91] or any other Federal or State law relating to the avoidance of preferential or fraudulent transfers, the Board, whether acting as such or as conservator or liquidating agent of an insured credit union, may not avoid any transfer of money or other property in connection with any qualified financial contract with an insured credit union.

(ii) Exception for certain transfers.— Clause (i) shall not apply to any transfer of money or other property in connection with any qualified financial contract with an insured credit union if the Board determines that the transferee had actual intent to hinder, delay, or defraud such credit union, the creditors of such credit union, or any conservator or liquidating agent appointed for such credit union.

(D) Certain contracts and agreements defined.— For purposes of this subsection, the following definitions shall apply:

(i) Qualified financial contract.— The term “qualified financial contract” means any securities contract, forward contract, repurchase agreement, and any similar agreement that the Board determines by regulation, resolution, or order to be a qualified financial contract for purposes of this paragraph.

(ii) Securities contract.— The term “securities contract”—

(I) means a contract for the purchase, sale, or loan of a security, a certificate of deposit, a mortgage loan, or any interest in a mortgage loan, a group or index of securities, certificates of deposit, or mortgage loans or interests therein (including any interest therein or based on the value thereof) or any option on any of the foregoing, including any option to purchase or sell any such security, certificate of deposit, mortgage loan, interest, group or index, or option, and including any repurchase or reverse repurchase transaction on any such security, certificate of deposit, mortgage loan, interest, group or index, or option;

(II) does not include any purchase, sale, or repurchase obligation under a participation in a commercial mortgage loan unless the Board determines by regulation, resolution, or order to include any such agreement within the meaning of such term;

(III) means any option entered into on a national securities exchange relating to foreign currencies;

(IV) means the guarantee by or to any securities clearing agency of any settlement of cash, securities, certificates of deposit, mortgage loans or interests therein, group or index of securities, certificates of deposit, or mortgage loans or interests therein (including any interest therein or based on the value thereof) or option on any of the foregoing, including any option to purchase or sell any such security, certificate of deposit, mortgage loan, interest, group or index, or option;

(V) means any margin loan;

(VI) means any other agreement or transaction that is similar to any agreement or transaction referred to in this clause;

(VII) means any combination of the agreements or transactions referred to in this clause;

(VIII) means any option to enter into any agreement or transaction referred to in this clause;

(IX) means a master agreement that provides for an agreement or transaction referred to in subclause (I), (III), (IV), (V), (VI), (VII), or (VIII), together with all supplements to any such master agreement, without regard to whether the master agreement provides for an agreement or transaction that is not a securities contract under this clause, except that the master agreement shall be considered to be a securities contract under this clause only with respect to each agreement or transaction under the master agreement that is referred to in subclause (I), (III), (IV), (V), (VI), (VII), or (VIII); and

(X) means any security agreement or arrangement or other credit enhancement related to any agreement or transaction referred to in this clause, including any guarantee or reimbursement obligation in connection with any agreement or transaction referred to in this clause.

(iii) **Commodity contract.**— The term “commodity contract” means—

(I) with respect to a futures commission merchant, a contract for the purchase or sale of a commodity for future delivery on, or subject to the rules of, a contract market or board of trade;

(II) with respect to a foreign futures commission merchant, a foreign future;

(III) with respect to a leverage transaction merchant, a leverage transaction;

(IV) with respect to a clearing organization, a contract for the purchase or sale of a commodity for future delivery on, or subject to the rules of, a contract market or board of trade that is cleared by such clearing organization, or commodity option traded on, or subject to the rules of, a contract market or board of trade that is cleared by such clearing organization;

(V) with respect to a commodity options dealer, a commodity option;

(VI) any other agreement or transaction that is similar to any agreement or transaction referred to in this clause;

(VII) any combination of the agreements or transactions referred to in this clause;

(VIII) any option to enter into any agreement or transaction referred to in this clause;

(IX) a master agreement that provides for an agreement or transaction referred to in subclause (I), (II), (III), (IV), (V), (VI), (VII), or (VIII), together with all supplements to any such master agreement, without regard to whether the master agreement provides for an agreement or transaction that is not a commodity contract under this clause, except that the master agreement shall be considered to be a commodity contract under this clause only with respect to each agreement or transaction under the master agreement that is referred to in subclause (I), (II), (III), (IV), (V), (VI), (VII), or (VIII); or

(X) any security agreement or arrangement or other credit enhancement related to any agreement or transaction referred to in this clause, including any guarantee or reimbursement obligation in connection with any agreement or transaction referred to in this clause.

(iv) **Forward contract.**— The term “forward contract” means—

(I) a contract (other than a commodity contract) for the purchase, sale, or transfer of a commodity or any similar good, article, service, right, or interest which is presently or in the future becomes the subject of dealing in the forward contract trade, or product or byproduct thereof, with a maturity date more than 2 days after the date the contract is entered into, including, a repurchase transaction, reverse repurchase transaction, consignment, lease, swap, hedge transaction, deposit, loan, option, allocated transaction, unallocated transaction, or any other similar agreement;

(II) any combination of agreements or transactions referred to in subclauses (I) and (III);

(III) any option to enter into any agreement or transaction referred to in subclause (I) or (II);

(IV) a master agreement that provides for an agreement or transaction referred to in subclauses (I), (II), or (III), together with all supplements to any such master agreement, without regard to whether the master agreement provides for an agreement or transaction

that is not a forward contract under this clause, except that the master agreement shall be considered to be a forward contract under this clause only with respect to each agreement or transaction under the master agreement that is referred to in subclause (I), (II), or (III); or

(V) any security agreement or arrangement or other credit enhancement related to any agreement or transaction referred to in subclause (I), (II), (III), or (IV), including any guarantee or reimbursement obligation in connection with any agreement or transaction referred to in any such subclause.

(v) Repurchase agreement— The term “repurchase agreement” (which definition also applies to a reverse repurchase agreement)—

(I) means an agreement, including related terms, which provides for the transfer of one or more certificates of deposit, mortgage-related securities (as such term is defined in the Securities Exchange Act of 1934), mortgage loans, interests in mortgage-related securities or mortgage loans, eligible bankers' acceptances, qualified foreign government securities or securities that are direct obligations of, or that are fully guaranteed by, the United States or any agency of the United States against the transfer of funds by the transferee of such certificates of deposit, eligible bankers' acceptances, securities, mortgage loans, or interests with a simultaneous agreement by such transferee to transfer to the transferor thereof certificates of deposit, eligible bankers' acceptances, securities, mortgage loans, or interests as described above, at a date certain not later than 1 year after such transfers or on demand, against the transfer of funds, or any other similar agreement;

(II) does not include any repurchase obligation under a participation in a commercial mortgage loan unless the Board determines by regulation, resolution, or order to include any such participation within the meaning of such term;

(III) means any combination of agreements or transactions referred to in subclauses (I) and (IV);

(IV) means any option to enter into any agreement or transaction referred to in subclause (I) or (III);

(V) means a master agreement that provides for an agreement or transaction referred to in subclause (I), (III), or (IV), together with all supplements to any such master agreement, without regard to whether the master agreement provides for an agreement or transaction that is not a repurchase agreement under this clause, except that the master agreement shall be considered to be a repurchase agreement under this subclause only with respect to each agreement or transaction under the master agreement that is referred to in subclause (I), (III), or (IV); and

(VI) means any security agreement or arrangement or other credit enhancement related to any agreement or transaction referred to in subclause (I), (III), (IV), or (V), including any guarantee or reimbursement obligation in connection with any agreement or transaction referred to in any such subclause.

For purposes of this clause the term “qualified foreign government security” means a security that is a direct obligation of, or that is fully guaranteed by, the central government of a member of the Organization for Economic Cooperation and Development (as determined by regulation or order adopted by the appropriate Federal banking authority).

(vi) Swap agreement— The term “swap agreement” means—

(I) any agreement, including the terms and conditions incorporated by reference in any such agreement, which is an interest rate swap, option, future, or forward agreement, including a rate floor, rate cap, rate collar, cross-currency rate swap, and basis swap; a spot, same day tomorrow, tomorrow-next, forward, or other foreign exchange or precious metals agreement; a currency swap, option, future, or forward agreement; an equity index or equity swap, option, future, or forward agreement; a debt index or debt swap, option, future, or forward agreement; a total return, credit spread or credit swap, option, future, or

forward agreement; a commodity index or commodity, swap, option, future, or forward agreement; or a weather swap, weather derivative, or weather option;

(II) any agreement or transaction that is similar to any other agreement or transaction referred to in this clause and that is of a type that has been, is presently, or in the future becomes, the subject of recurrent dealings in the swap markets (including terms and conditions incorporated by reference in such agreement) and that is a forward, swap, future, or option on one or more rates, currencies, commodities, equity securities or other equity instruments, debt securities or other debt instruments, quantitative measures associated with an occurrence, extent of an occurrence, or contingency associated with a financial, commercial, or economic consequence, or economic or financial indices or measures of economic or financial risk or value;

(III) any combination of agreements or transactions referred to in this clause;

(IV) any option to enter into any agreement or transaction referred to in this clause;

(V) a master agreement that provides for an agreement or transaction referred to in subclause (I), (II), (III), or (IV), together with all supplements to any such master agreement, without regard to whether the master agreement contains an agreement or transaction that is not a swap agreement under this clause, except that the master agreement shall be considered to be a swap agreement under the clause only with respect to each agreement or transaction under the master agreement that is referred to in subclause (I), (II), (III), or (IV); and

(VI) any security agreement or arrangement or other credit enhancement related to any agreements or transactions referred to in subclause (I), (II), (III), (IV), or (V), including any guarantee or reimbursement obligation in connection with any agreement or transaction referred to in any such subclause.

Such term is applicable for purposes of this subsection only and shall not be construed or applied so as to challenge or affect the characterization, definition, or treatment of any swap agreement under any other statute, regulation, or rule, including the Securities Act of 1933, the Securities Exchange Act of 1934, the Public Utility Holding Company Act of 1935, the Trust Indenture Act of 1939, the Investment Company Act of 1940, the Investment Advisers Act of 1940, the Securities Investors Protection Act of 1970, the Commodity Exchange Act, the Gramm-Leach-Bliley Act, and the Legal Certainty for Bank Products Act of 2000.

(vii) Treatment of master agreement as one agreement – Any master agreement for any contract or agreement described in any preceding clause of this subparagraph (or any master agreement for such master agreement or agreements), together with all supplements to such master agreement, shall be treated as a single agreement and a single qualified financial contract. If a master agreement contains provisions relating to agreements or transactions that are not themselves qualified financial contracts, the master agreement shall be deemed to be a qualified financial contract only with respect to those transactions that are themselves qualified financial contracts.

(viii) Transfer – The term “transfer” means every mode, direct or indirect, absolute or conditional, voluntary or involuntary, of disposing of or parting with property or with an interest in property, including retention of title as a security interest and foreclosure of the depository institution’s equity of redemption.

(E) Certain protections in event of appointment of conservator – Notwithstanding any other provision of this chapter (other than subsections (b)(9) and (c)(10) of this section, and section 1788(a)(3) of this title), any other Federal law, or the law of any State, no person shall be stayed or prohibited from exercising –

(i) any right such person has to cause the termination, liquidation, or acceleration of any qualified financial contract with a credit union in a conservatorship based upon a default under such financial contract which is enforceable under applicable noninsolvency law; (ii)

any right under any security agreement or arrangement or other credit enhancement related to 1 or more qualified financial contracts described in clause (i);

(iii) any right to offset or net out any termination values, payment amounts, or other transfer obligations arising under or in connection with such qualified financial contracts.

(F) Clarification – No provision of law shall be construed as limiting the right or power of the Board, or authorizing any court or agency to limit or delay, in any manner, the right or power of the Board to transfer any qualified financial contract in accordance with paragraphs (9) and (10) of this subsection or to disaffirm or repudiate any such contract in accordance with subsection (c)(1) of this section.

(G) Walkaway clauses not effective –

(i) In general—Notwithstanding the provisions of subparagraphs (A) and (E), and sections 4403 and 4404 of this title, no walkaway clause shall be enforceable in a qualified financial contract of an insured credit union in default.

(ii) Walkaway clause defined – For purposes of this subparagraph, the term “walkaway clause” means a provision in a qualified financial contract that, after calculation of a value of a party’s position or an amount due to or from 1 of the parties in accordance with its terms upon termination, liquidation, or acceleration of the qualified financial contract, either does not create a payment obligation of a party or extinguishes a payment obligation of a party in whole or in part solely because of such party’s status as a nondefaulting party.

(H) Recordkeeping requirements— The Board, in consultation with the appropriate Federal banking agencies, may prescribe regulation requiring more detailed recordkeeping by an insured credit union with respect to qualified financial contracts (including market valuations) only if such insured credit union is in a troubled condition (as such term is defined by the Board pursuant to section 1790a of this title).

(9) Transfer of qualified financial contracts –

(A) In general – In making any transfer of assets or liabilities of a credit union in default which includes any qualified financial contract, the conservator or liquidating agent for such credit union shall either –

(i) transfer to 1 financial institution, other than a financial institution for which a conservator, receiver, trustee in bankruptcy, or other legal custodian has been appointed or which is otherwise the subject of a bankruptcy or insolvency proceeding –

(I) all qualified financial contracts between any person or any affiliate of such person and the credit union in default;

(II) all claims of such person or any affiliate of such person against such credit union under any such contract (other than any claim which, under the terms of any such contract, is subordinated to the claims of general unsecured creditors of such credit union);

(III) all claims of such credit union against such person or any affiliate of such person under any such contract; and

(IV) all property securing or any other credit enhancement for any contract described in subclause (I) or any claim described in subclause (II) or (III) under any such contract; or

(ii) transfer none of the qualified financial contracts, claims, property or other credit enhancement referred to in clause (i) (with respect to such person and any affiliate of such person).

(B) Transfer to foreign bank, foreign financial institution, or branch or agency of a foreign bank or financial institution— In transferring any qualified financial contracts and related claims and property under subparagraph (A)(i), the conservator and liquidating agent for the credit union shall not make such transfer to a foreign bank, financial institution organized under the laws of a foreign country, or a branch or agency of a foreign bank or financial institution unless, under the law applicable to such bank, financial institution, branch or agency, to the qualified financial contracts, and to any netting contract, any security agreement or arrangement or other credit enhancement related to 1 or more

qualified financial contracts, the contractual rights of the parties to such qualified financial contracts, netting contracts, security agreements or arrangements, or other credit enhancements are enforceable substantially to the same extent as permitted under this section.

(C) Transfer of contracts subject to the rules of a clearing organization— In the event that a conservator or liquidating agent transfers any qualified financial contract and related claims, property, and credit enhancements pursuant to subparagraph (A)(i) and such contract is cleared by or subject to the rules of a clearing organization, the clearing organization shall not be required to accept the transferee as a member by virtue of the transfer.

(D) Definitions— For purposes of this paragraph—

(i) the term “financial institution” means a broker or dealer, a depository institution, a futures commission merchant, a credit union, or any other institution, as determined by the Board by regulation to be a financial institution; and

(ii) the term “clearing organization” has the same meaning as in section 4402 of this title.

(10) Notification of transfer—

(A) In general— If—

(i) the conservator or liquidating agent for an insured credit union in default makes any transfer of the assets and liabilities of such credit union; and

(ii) the transfer includes any qualified financial contract, the conservator or liquidating agent shall notify any person who is a party to any such contract of such transfer by 5:00p.m. (eastern time) on the business day following the date of the appointment of the liquidating agent in the case of a liquidation, or the business day following such transfer in the case of a conservatorship.

(B) Certain rights not enforceable—

(i) Liquidation—A person who is a party to a qualified financial contract with an insured credit union may not exercise any right that such person has to terminate, liquidate, or net such contract under paragraph (8)(A) of this subsection or section 4403 or 4404 of this title, solely by reason of or incidental to the appointment of a liquidating agent for the credit union institution (or the insolvency or financial condition of the credit union for which the liquidating agent has been appointed)—

(I) until 5:00p.m. (eastern time) on the business day following the date of the appointment of the liquidating agent; or

(II) after the person has received notice that the contract has been transferred pursuant to paragraph (9)(A).

(ii) Conservatorship—A person who is a party to a qualified financial contract with an insured credit union may not exercise any right that such person has to terminate, liquidate, or net such contract under paragraph (8)(E) of this subsection or section 4403 or 4404 of this title, solely by reason of or incidental to the appointment of a conservator for the credit union or the insolvency or financial condition of the credit union for which the conservator has been appointed.

(iii) Notice—For purposes of this paragraph, the Board as conservator or liquidating agent of an insured credit union shall be deemed to have notified a person who is a party to a qualified financial contract with such credit union if the Board has taken steps reasonably calculated to provide notice to such person by the time specified in subparagraph (A).

(C) Treatment of bridge banks— The following institutions shall not be considered to be a financial institution for which a conservator, receiver, trustee in bankruptcy, or other legal custodian has been appointed or which is otherwise the subject of a bankruptcy or insolvency proceeding for purposes of paragraph (9):

(i) A bridge bank.

(ii) A credit union organized by the Board, for which a conservator is appointed either—

- (I) immediately upon the organization of the credit union; or
- (II) at the time of a purchase and assumption transaction between the credit union and the Board as receiver for a credit union in default.
- (D) “Business day” defined—For purposes of this paragraph, the term “business day” means any day other than any Saturday, Sunday, or any day on which either the New York Stock Exchange or the Federal Reserve Bank of New York is closed.
- (11) Disaffirmance or repudiation of qualified financial contracts—In exercising the rights of disaffirmance or repudiation of a conservator or liquidating agent with respect to any qualified financial contract to which an insured credit union is a party, the conservator or liquidating agent for such credit union shall either—
 - (A) disaffirm or repudiate all qualified financial contracts between—
 - (i) any person or any affiliate of such person; and
 - (ii) the credit union in default; or
 - (B) disaffirm or repudiate none of the qualified financial contracts referred to in subparagraph (A) (with respect to such person or any affiliate of such person).
- (12) Certain security interests not avoidable—No provision of this subsection shall be construed as permitting the avoidance of any legally enforceable or perfected security interest in any of the assets of any credit union except where such an interest is taken in contemplation of the credit union’s insolvency or with the intent to hinder, delay, or defraud the credit union or the creditors of such credit union.
- (13) Authority to enforce contracts—
 - (A) In general—The conservator or liquidating agent may enforce any contract, other than a director’s or officer’s liability insurance contract or a credit union bond, entered into by the credit union notwithstanding any provision of the contract providing for termination, default, acceleration, or exercise of rights upon, or solely by reason of, insolvency or the appointment of or the exercise of rights of powers by a conservator or liquidating agent.
 - (B) Certain rights not affected— No provision of this paragraph may be construed as impairing or affecting any right of the conservator or liquidating agent to enforce or recover under a directors or officers liability insurance contract or credit union bond under other applicable law.
 - (C) Consent requirement—
 - (i) In general—Except as otherwise provided by this section, no person may exercise any right or power to terminate, accelerate, or declare a default under any contract to which the credit union is a party, or to obtain possession of or exercise control over any property of the credit union or affect any contractual rights of the credit union, without the consent of the conservator or liquidating agent, as appropriate, during the 45-day period beginning on the date of the appointment of the conservator, or during the 90-day period beginning on the date of the appointment of the liquidating agent, as applicable.
 - (ii) Certain exceptions—No provision of this subparagraph shall apply to a director or officer liability insurance contract or a credit union bond, or to the rights of parties to certain qualified financial contracts pursuant to paragraph (8), or shall be construed as permitting the conservator or liquidating agent to fail to comply with otherwise enforceable provisions of such contract.
 - (iii) Rule of construction— Nothing in this subparagraph shall be construed to limit or otherwise affect the applicability of title 11, United States Code.
- (14) Exception for Federal Reserve and Federal home loan banks—No provision of this subsection shall apply with respect to—
 - (A) any extension of credit from any Federal home loan bank or Federal Reserve bank to any insured depository institution; or
 - (B) any security interest in the assets of the institution securing any such extension of credit.

(15) Savings clause.—The meanings of terms used in this subsection are applicable for purposes of this subsection only, and shall not be construed or applied so as to challenge or affect the characterization, definition, or treatment of any similar terms under any other statute, regulation, or rule, including the Gramm-Leach-Bliley Act, the Legal Certainty for Bank Products Act of 2000, the securities laws (as that term is defined in section (a)(47) of the Securities Exchange Act of 1934), and the Commodity Exchange Act.

(d) Payment of insured deposits.—

(1) In general.—In case of the liquidation of any insured credit union, payment of the insured deposits in such credit union shall be made by the Board as soon as possible, subject to the provisions of subsection (e) of this section, either by cash or by making available to each accountholder a transferred deposit in a new credit union in the same community or in another insured credit union in an amount equal to the insured deposit of such accountholder.

(2) Proof of claims.—The Board, in its discretion, may require proof of claims to be filed [may investigate said claims under Section 206(p)]* and may approve or reject such claims for insured deposits.

(3) Resolution of disputes.—A determination by the Administration regarding any claim for insurance coverage shall be treated as a final determination for purposes of this section. In its discretion, the Board may promulgate regulations prescribing procedures for resolving any disputed claim relating to any insured deposit or any determination of insurance with respect to any deposit. A final determination made by the Board regarding any claim for insurance coverage shall be a final agency action reviewable in accordance with chapter 7 of title 5, United States Code, by the United States district court for the Federal judicial district where the principal place of business of the credit union is located.

(4) Statutes of limitations.—Any request for review of a final determination by the Board regarding any claim for insurance coverage shall be filed with the appropriate United States district court not later than 60 days after the date on which such determination is issued.

(e) Subrogation of Board.—

(1) In general.—Notwithstanding any other provision of Federal law, the law of any State, or the constitution of any State, the Board, upon the payment to any accountholder as provided in subsection (d) in connection with any insured credit union described in such subsection or the assumption of any deposit in such credit union by another insured credit union pursuant to this section, shall be subrogated to all rights of the accountholder against such credit union to the extent of such payment or assumption.

(2) Dividends on subrogated amounts.— The subrogation of the Board under paragraph (1) with respect to any insured credit union shall include the right on the part of the Board to receive the same dividends from the proceeds of the assets of such credit union as would have been payable to the accountholder on a claim for the insured deposit, but such accountholder shall retain such claim for any uninsured or unassumed portion of the deposit.

(f) Valuation of Claims in Default.—

(1) In general.—Notwithstanding any other provision of Federal law or the law of any State, this subsection shall govern the rights of the creditors (other than insured accountholders) of such credit union.

(2) Maximum liability.—The maximum liability of the Board, acting as liquidating agent or in any other capacity, to any person having a claim against the liquidating agent or the insured credit union for which such liquidating agent is appointed shall equal the amount such claimant would have received if the Board had liquidated the assets and liabilities of

such credit union without exercising the Board's authority under subsection (n) of this section.

(3) Additional payments authorized.—

(A) In general.—The Board may, in its discretion and in the interests of minimizing its losses, use its own resources to make additional payments or credit additional amounts to or with respect to or for the account of any claimant or category of claimants. The Board shall not be obligated, as a result of having made any such payment or credited any such amount to or with respect to or for the account of any claimant or category of claimants, to make payments to any other claimant or category of claimants.

(B) Manner of payment.—The Board may make the payments or credit the amounts specified in subparagraph (A) directly to the claimants or may make such payments or credit such amounts to an open insured credit union to induce the open insured credit union to accept liability for such claims.

(g) Limitation on Court Action.—Except as provided in this section, no court may take any action, except at the request of the Board of Directors by regulation or order, to restrain or affect the exercise of powers or functions of the Board as a conservator or a liquidating agent.

(h) Liability of Directors and Officers.—A director or officer of an insured credit union may be held personally liable for monetary damages in any civil action by, on behalf of, or at the request or direction of the Board, which action is prosecuted wholly or partially for the benefit of the Board—

(1) acting as conservator or liquidating agent of such insured credit union, (2) acting based upon a suit, claim, or cause of action purchased from, assigned by, or otherwise conveyed by such liquidating agent or conservator, or

(3) acting based upon a suit, claim, or cause of action purchased from, assigned by, or otherwise conveyed in whole or in part by an insured credit union or its affiliate in connection with assistance provided under section 208, for gross negligence, including any similar conduct or conduct that demonstrates greater disregard of a duty of care (than gross negligence) including intentional tortious conduct, as such terms are defined and determined under applicable State law. Nothing in this paragraph shall impair or affect any right, if any, of the Board under other applicable law.

(i) Damages.—In any proceeding related to any claim against an insured credit union's director, officer, employee, agent, attorney, accountant, appraiser, or any other party employed by or providing services to an insured credit union, recoverable damages determined to result from the improvident or otherwise improper use or investment of any insured credit union's assets shall include principal losses and appropriate interest.

(j) Whenever any insured State-chartered credit union shall have been closed by action of its board of directors or by the commission, board, or authority having supervision of such credit union, as the case may be, or by a court of competent jurisdiction, on account of bankruptcy or insolvency, the Board shall accept appointment as liquidating agent therefor, if such appointment is tendered by the commission, board, or authority having supervision of such credit union, or by a court of competent jurisdiction, and is authorized or permitted by State law. With respect to any such State-chartered credit union, the Board as such liquidating agent shall possess all the rights, powers, and privileges granted by State law to a liquidating agent of a State-chartered credit union. For the purposes of this subsection, the term "liquidating agent" includes a liquidating agent, receiver, conservator, commission, person, or other agency charged by law with the duty of winding up the affairs of a credit union.

(k) Insured amounts payable.

(1) Net insured amount.

(A) In general.—Subject to the provisions of paragraph (2), the net amount of share insurance payable to any member at an insured credit union shall not exceed the total amount of the shares or deposits in the name of the member (after deducting offsets), less any part thereof which is in excess of the standard maximum share insurance amount, as determined in accordance with this paragraph and paragraphs (5) and (6), and consistently with actions taken by the Federal Deposit Insurance Corporation under section 1821(a) of this title.

(B) Aggregation.—Determination of the net amount of share insurance under subparagraph (A), shall be in accordance with such regulations as the Board may prescribe, and, in determining the amount payable to any member, there shall be added together all accounts in the credit union maintained by that member for that member's own benefit, either in the member's name or in the names of others.

(C) Authority to define the extent of coverage.—The Board may define, with such classifications and exceptions as it may prescribe, the extent of the share insurance coverage provided for member accounts, including member accounts in the name of a minor in trust, or in joint tenancy.

(2) Government depositors or members.

(A) In general.—Notwithstanding any limitation in this Act or in any other provision of law relating to the amount of insurance available to any 1 depositor or member, deposits or shares of a government depositor or member shall be insured in an amount equal to the standard maximum share insurance amount (as determined under paragraph (5)), subject to subparagraph (C).

(B) Government depositor.—In this paragraph, the term “government depositor” means a depositor that is—

(i) an officer, employee, or agent of the United States having official custody of public funds and lawfully investing the same in a credit union insured in accordance with this title;

(ii) an officer, employee, or agent of any State of the United States, or of any county, municipality, or political subdivision thereof having official custody of public funds and lawfully investing the same in a credit union insured in accordance with this title in such State;

(iii) an officer, employee, or agent of the District of Columbia having official custody of public funds and lawfully investing the same in a credit union insured in accordance with this title in the District of Columbia;

(iv) an officer, employee, or agent of the Commonwealth of Puerto Rico, of the Panama Canal Zone, or of any territory or possession of the United States, or of any county, municipality, or political subdivision thereof having official custody of public funds and lawfully investing the same in a credit union insured in accordance with this title in the Commonwealth of Puerto Rico, the Panama Canal Zone, or any such territory or possession, respectively; or

(v) an officer, employee, or agent of any Indian tribe (as defined in Section 3(c) of the Indian Financing Act of 1974) or agency thereof having official custody of tribal funds and lawfully investing the same in a credit union insured in accordance with this title.

(C) Authority to limit deposits.— The Board may limit the aggregate amount of funds that may be invested or deposited in any credit union insured in accordance with this title by any government depositor or member on the basis of the size of any such credit union in terms of its assets.

(3) Notwithstanding any limitation in this title or in any other provision of law relating to the amount of insurance available for the account of any one depositor or member, funds invested in a credit union insured in accordance with this title pursuant to a pension or profit-sharing plan described in section 401(d) of the Internal Revenue Code of 1954, as amended, and funds invested in such an insured credit union in the form of individual

retirement accounts as described in section 408(a) of the Internal Revenue Code of 1954, as amended, shall be insured in the amount of \$250,000 (which amount shall be subject to inflation adjustments as provided under section 11(a)(1)(F) of the Federal Deposit Insurance Act, except that \$250,000 shall be substituted for \$100,000 wherever such term appears in such section) per account. As to any plan qualifying under section 401(d) or section 408(a) of the Internal Revenue Code of 1954, the term “per account” means the present vested and ascertainable interest of each beneficiary under the plan, excluding any remainder interest created by, or as a result of, the plan.

(4) Coverage for certain employee benefit plan deposits.

(A) Pass-through insurance.—The Administration shall provide pass-through share insurance for the deposits or shares of any employee benefit plan.

(B) Prohibition on acceptance of deposits— An insured credit union that is not well capitalized or adequately capitalized may not accept employee benefit plan deposits.

(C) Definitions—For purposes of this paragraph, the following definitions shall apply:

(i) Capital standards—The terms “well capitalized” and “adequately capitalized” have the same meanings as in section 1790d of this title.

(ii) Employee benefit plan—The term “employee benefit plan”—

(I) has the meanings given to such term in section 1002(3) of Title 29;

(II) includes any plan described in section 401(d) of Title 26; and

(III) includes any eligible deferred compensation plan described in section 457 of Title 26.

(iii) Pass-through share insurance—The term “pass-through share insurance” means, with respect to an employee benefit plan, insurance coverage based on the interest of each participant, in accordance with regulations issued by the Administration.

(D) Rule of construction—No provision of this paragraph shall be construed as authorizing an insured credit union to accept the deposits of an employee benefit plan in an amount greater than such credit union is authorized to accept under any other provision of Federal or State law.

(5) Standard maximum share insurance amount defined—For purposes of this Act, the term “standard maximum share insurance amount” means \$100,000, adjusted as provided under section 1821(a)(1)(F) of this title.

(l) Payment of an insured account to any person by the Board shall discharge the Board to the same extent that payment to such person by the closed insured credit union would have discharged it from liability for the insured account.

(m) Except as otherwise prescribed by the Board, the Board shall not be required to recognize as the owner of any portion of an account appearing on the records of the closed credit union under a name other than that of the claimant any person whose name or interest as such owner is not disclosed on the records of such closed credit union as part owner of such account, if such recognition would increase the aggregate amount of the insured accounts in such closed credit union.

(n) The Board may withhold payment of such portion of the insured account of any member of a closed credit union as may be required to provide for the payment of any direct or indirect liability of such member to the closed credit union or its liquidating agent, which is not offset against a claim due from such credit union, pending the determination and payment of such liability by such member or any other person liable therefor.

(o) If, after the Board shall have given at least four months’ notice to the member by mailing a copy thereof to his last-known address appearing on the records of the closed credit union, any member of the closed credit union shall fail to claim his insured account from the Board within 18 months after the appointment of the liquidating agent for the closed credit union, all rights of the member against the Board with respect to the insured account shall be barred, and all rights of the member against the closed credit union, or

the estate to which the Board may have become subrogated, shall thereupon revert to the member.

(p)(1) Liquidating agents of insured credit unions closed for liquidation on account of bankruptcy or insolvency may offer the assets of such credit unions for sale to the Board or as security for loans from the Board, upon receiving permission from the commission, board, or authority having supervision of such credit union, in the case of an insured State chartered credit union, in accordance with express provisions of State law. The proceeds of every such sale or loan shall be utilized for the same purposes and in the same manner as other funds realized from the liquidation of the assets of such credit unions. The Board, in its discretion, may make loans on the security of or may purchase and liquidate or sell any part of the assets of an insured credit union closed for liquidation on account of bankruptcy or insolvency, but in any case in which the Board is acting as liquidating agent of a closed insured credit union, no such loan or purchase shall be made without the approval of a court of competent jurisdiction.

(2) No agreement which tends to diminish or defeat the right, title, or interest of the Board in any asset acquired by it under this subsection, either as security for a loan or by purchase, shall be valid against the Board unless such agreement—

(A) shall be in writing;

(B) shall have been executed by the credit union and the person or persons claiming an adverse interest thereunder, including the obligor, contemporaneously with the acquisition of the asset by the credit union;

(C) shall have been approved by the board of directors of the credit union, which approval shall be reflected in the minutes of such board; and

(D) shall have been, continuously, from the time of its execution, an official record of the credit union.

(q) Prohibition on Certain Acquisitions of Assets.—

(1) Convicted debtors.—Except as provided in paragraph (2), any individual who—

(A) has been convicted of an offense under section 215, 657, 1006, 1014, 1032, 1341, 1343, or 1344 of title 18, United States Code, or of conspiring to commit any such offense, affecting any insured credit union for which the Board is appointed conservator or liquidating agent; and

(B) is in default on any loan or other extension of credit from such insured credit union which, if not paid, will cause substantial loss to the credit union, the National Credit Union Share Insurance Fund, or the Board, may not purchase any asset of such credit union from the conservator or liquidating agent.

(2) Settlement of claims.—Paragraph (1) shall not apply to the sale or transfer by the Board of any asset of any insured credit union to any individual if the sale or transfer of the asset resolves or settles, or is part of the resolution or settlement, of—

(A) 1 or more claims that have been, or could have been, asserted by the Board against the individual; or

(B) obligations owed by the individual to the insured credit union or the Board.

(r) Foreign Investigations.—The Board, as conservator or liquidating agent of any insured credit union and for purposes of carrying out any power, authority, or duty with respect to an insured credit union—

(1) may request the assistance of any foreign banking authority and provide assistance to any foreign banking authority in accordance with section 206(u); and

(2) may maintain an office to coordinate foreign investigations or investigations on behalf of foreign banking authorities.

§ 1788 § 208

Special assistance to avoid liquidation.— (a)(1) In order to reopen a closed insured credit union or in order to prevent the closing of an insured credit union which the Board has determined is in danger of closing or in order to assist in the voluntary liquidation of a solvent credit union, the Board, in its discretion, is authorized to make loans to, or purchase the assets of, or establish accounts in such insured credit union upon such terms and conditions as it may prescribe.

Except with respect to the voluntary liquidation of a solvent credit union, such loans shall be made and such accounts shall be established only when, in the opinion of the Board, such action is necessary to protect the fund or the interests of the members of the credit union.

(2) Whenever in the judgment of the Board such action will reduce the risk or avert a threatened loss to the fund and will facilitate a merger or consolidation of an insured credit union with another insured credit union, or will facilitate the sale of the assets of an open or closed insured credit union to and assumption of its liability by another person, the Board may, upon such terms and conditions as it may determine, make loans secured whole or in part by assets of an open or closed insured credit union, which loans may be in subordination to the rights of members and creditors of such credit union, or the Board may purchase any of such assets or may guarantee any person against loss by reason of his assuming the liabilities and purchasing the assets of an open or closed insured credit union. For purposes of this paragraph, the term “person” means any credit union, individual, partnership, corporation, trust, estate, cooperative, association, government or governmental subdivision or agency, or other entity.

(3) No agreement which tends to diminish or defeat the right, title, or interest of the Board, in any asset acquired by it under this subsection, either as security for a loan or by purchase, shall be valid against the Board unless such agreement—

(A) shall be in writing;

(B) shall have been executed by the credit union and the person or persons claiming an adverse interest thereunder, including the obligor, contemporaneously with the acquisition of the asset by the credit union;

(C) shall have been approved by the board of directors of the credit union, which approval shall be reflected in the minutes of such board; and

(D) shall have been continuously, from the time of its execution, an official record of the credit union.

(b) For the protection of the Fund, the Board, without regard to the Federal Property and Administrative Services Act of 1949, may—

(1) deal with, complete, reconstruct, rent, renovate, modernize, insure, make contracts for the management of, sell for cash or credit, or lease, in its discretion, any real property acquired or held by it under this section; and

(2) assign or sell at public or private sale, or otherwise dispose of, any evidence of debt, contract, claim, personal property, or security assigned to or held by it under this section. Section 3709 of the Revised Statutes of the United States shall not apply to any purchase or contract for services or supplies made or entered into by the Board under this section if the amount thereof does not exceed \$1,000, or to any contract for hazard insurance on any real property acquired or held by it under this section.

(c) Money received by the Board in carrying out this section shall be paid into the Fund.

§ 1789 § 209

Administrative provisions.—(a) In carrying out the purpose of this title, the Board may—

(1) make contracts;

(2) sue and be sued, complain and defend, in any court of law or equity, State or Federal. All suits of a civil nature at common law or in equity to which the Board shall be a party shall be deemed to arise under the laws of the United States, and the United States district courts shall have original jurisdiction thereof, without regard to the amount in controversy. The Board may, without bond or security, remove any such action, suit, or proceeding from a State court to the United States district court for the district or division embracing the place where the same is pending by following any procedure for removal now or hereafter in effect, except that any such suit to which the Board is a party in its capacity as liquidating agent of a Statechartered credit union and which involves only the rights or obligations of members, creditors, and such State credit union under State law shall not be deemed to arise under the laws of the United States. No attachment or execution shall be issued against the Board or its property before final judgment in any suit, action, or proceeding in any State, county, municipal, or United States court. The Board shall designate an agent upon whom service of process may be made in any State, territory, or jurisdiction in which any insured credit union is located;

(3) pursue to final disposition by way of compromise or otherwise claims both for and against the United States (other than tort claims, claims involving administrative expenses, and claims in excess of \$5,000 arising out of contracts for construction, repairs, and the purchase of supplies and materials) which are not in litigation and have not been referred to the Department of Justice;

(4) to appoint such officers and employees as are not otherwise provided for in this Act, to define their duties, fix their compensation, require bonds of them and fix the penalty thereof, and to dismiss at pleasure such officers or employees. Nothing in this chapter or any other Act shall be construed to prevent the appointment and compensation as an officer or employee of the Administration of any officer or employee of the United States in any board, commission, independent establishment, or executive department thereof;

(5) employ experts and consultants or organizations thereof, as authorized by section 15 of the Administrative Expenses Act of 1946 (5 U.S.C. 55a);

(6) prescribe the manner in which its general business may be conducted and the privileges granted to it by law may be exercised and enjoyed;

(7) exercise all powers specifically granted by the provisions of this title and such incidental powers as shall be necessary to carry out the powers so granted;

(8) make examinations of and require information and reports from insured credit unions, as provided in this title;

(9) act as liquidating agent;

(10) delegate to any officer or employee of the Administration such of its functions as it deems appropriate; and

(11) prescribe such rules and regulations as it may deem necessary or appropriate to carry out the provisions of this title.

(b) With respect to the financial operations shall—

(1) prepare annually and submit a business-type budget as provided for wholly owned Government corporations by the Government Corporation Control Act; and (2) maintain an integral set of accounts, which shall be audited by the General Accounting Office in accordance with principles and procedures applicable to commercial corporate transactions, as provided by section 105 of the Government Corporation Control Act.

§ 1789a § 210

Credit unions as depositaries of public money; fiscal agents; duties.—Any credit union the accounts of which are insured under this title shall be a depositary of public money and may be employed as fiscal agent of the United States. The Secretary of the Treasury is authorized to deposit public money in any such insured credit union, and shall prescribe

such regulations as may be necessary to enable such credit unions to become depositories of public money and fiscal agents of the United States. Each credit union shall perform all such reasonable duties as depositories of public money and fiscal agent of the United States as may be required of it including services in connection with the collection of taxes and other obligations owed the United States.

§ 1790 § 211

Nondiscriminatory provision.—It is not the purpose of this title to discriminate in any manner against State-chartered credit unions and in favor of Federal credit unions, but it is the purpose of this title to provide all credit unions with the same opportunity to obtain and enjoy the benefits of this title.

§ 1790a § 212

Board disapproval of directors, committee members, and senior executive officers of insured credit unions.

(a) Prior Notice Required.—An insured credit union shall notify the Board of the proposed addition of any individual to the board of directors or committee or the employment of any individual as a senior executive officer of such credit union at least 30 days before such addition or employment becomes effective, if the insured credit union—

(1) has been chartered less than 2 years; or

(2) is in troubled condition, as determined on the basis of such credit union's most recent report of condition or report of examination.

(b) Disapproval By The Board.—An insured credit union may not add any individual to the board of directors or employ any individual as a senior executive officer if the Board issues a notice of disapproval of such addition or employment before the end of the 30-day period beginning on the date the agency receives notice of the proposed action pursuant to subsection (a).

(c) Exception in extraordinary circumstances.—

(1) In general.—The Board may prescribe by regulation conditions under which the prior notice requirement of subsection (a) may be waived in the event of extraordinary circumstances.

(2) No effect on disapproval authority of Board.—Such waivers shall not affect the authority of the Board to issue arising by reason of this subchapter, the Board notices of disapproval of such additions or employment of such individuals within 30 days after each such waiver.

(d) Additional information.—Any notice submitted to the Board by any insured credit union pursuant to subsection (a) shall include—

(1) the information described in section 7(j)(6)(A) of the Federal Deposit Insurance Act about the individual; and

(2) such other information as the Board may prescribe by regulation.

(e) Standard for disapproval.—The Board shall issue a notice of disapproval with respect to a notice submitted pursuant to subsection (a) if the competence, experience, character, or integrity of the individual with respect to whom such notice is submitted indicates that it would not be in the best interests of the depositors of the insured credit union or in the best interests of the public to permit the individual to be employed by, or associated with, such insured credit union.

(f) Definition regulations.—The Board shall prescribe by regulation a definition for the terms “troubled condition” and “senior executive officer” for purposes of subsection (a).

§ 1790b § 213

Credit union employee protection remedy.

(a) In General.—

(1) Employees of credit unions.—No insured credit union may discharge or otherwise discriminate against any employee with respect to compensation, terms, conditions, or privileges of employment because the employee (or any person acting pursuant to the request of the employee) provided information to the Board or the Attorney General regarding any possible violation of any law or regulation by the credit union or any director, officer, or employee of the credit union.

(2) Employees of the Administration.—The Administration may not discharge or otherwise discriminate against any employee (including any employee of the National Credit Union Central Liquidity Facility) with respect to compensation, terms, conditions, or privileges of employment because the employee (or any person acting pursuant to the request of the employee) provided information to the Administration or the Attorney General regarding any possible violation of any law or regulation by—

(A) any credit union or the Administration;

(B) any director, officer, committee member, or employee of any credit union; or

(C) any officer or employee of the Administration.

(b) Enforcement.—Any employee or former employee who believes he has been discharged or discriminated against in violation of subsection (a) may file a civil action in the appropriate United States district court before the close of the 2-year period beginning on the date of such discharge or discrimination. The complainant shall also file a copy of the complaint initiating such action with the Board.

(c) Remedies.—If the district court determines that a violation of subsection (a) has occurred, it may order the credit union or the Administration which committed the violation—

(1) to reinstate the employee to his former position,

(2) to pay compensatory damages, or

(3) take other appropriate actions to remedy any past discrimination.

(d) Limitations.—The protections of this section shall not apply to any employee who—

(1) deliberately causes or participates in the alleged violation of law or regulation, or

(2) knowingly or recklessly provides substantially false information to such an agency or the Attorney General.

§ 1790c § 214

Reward for information leading to recoveries or civil penalties.

The Board may pay rewards in connection with an offense affecting an insured credit union, under the same circumstances and subject to the same limitations that a Federal banking agency may pay rewards under section 33 of the Federal Deposit Insurance Act in connection with an offense affecting a depository institution insured by the Federal Deposit Insurance Corporation.

§ 1790d § 216 *

Prompt corrective action.—

(a) Resolving Problems To Protect Fund.—

*** There is no section 215 of the FCU Act.**

(1) Purpose.—The purpose of this section is to resolve the problems of insured credit unions at the least possible long-term loss to the Fund.

(2) Prompt corrective action required.—The Board shall carry out the purpose of this section by taking prompt corrective action to resolve the problems of insured credit unions.

(b) Regulations Required.—

(1) Insured credit unions.—

(A) In general.—The Board shall, by regulation, prescribe a system of prompt corrective action for insured credit unions that is—

(i) consistent with this section; and

(ii) comparable to section 38 of the Federal Deposit Insurance Act.

(B) Cooperative character of credit unions.—The Board shall design the system required under subparagraph (A) to take into account that credit unions are not-for-profit cooperatives that—

(i) do not issue capital stock;

(ii) must rely on retained earnings to build net worth; and

(iii) have boards of directors that consist primarily of volunteers.

(2) New credit unions.—

(A) In general.—In addition to regulations under paragraph (1), the Board shall, by regulation, prescribe a system of prompt corrective action that shall apply to new credit unions in lieu of this section and the regulations prescribed under paragraph (1).

(B) Criteria for alternative system.— The Board shall design the system prescribed under subparagraph (A)—

(i) to carry out the purpose of this section;

(ii) to recognize that credit unions (as cooperatives that do not issue capital stock) initially have no net worth, and give new credit unions reasonable time to accumulate net worth;

(iii) to create adequate incentives for new credit unions to become adequately capitalized by the time that they either—

(I) have been in operation for more than 10 years; or

(II) have more than \$10,000,000 in total assets;

(iv) to impose appropriate restrictions and requirements on new credit unions that do not make sufficient progress toward becoming adequately capitalized; and

(v) to prevent evasion of the purpose of this section.

(c) Net Worth Categories.—

(1) In general.—For purposes of this section the following definitions shall apply:

(A) Well capitalized.—An insured credit union is ‘well capitalized’ if—

(i) it has a net worth ratio of not less than 7 percent; and

(ii) it meets any applicable risk-based net worth requirement under subsection (d).

(B) Adequately capitalized.—An insured credit union is ‘adequately capitalized’ if—

(i) it has a net worth ratio of not less than 6 percent; and

(ii) it meets any applicable risk-based net worth requirement under subsection (d).

(C) Undercapitalized.—An insured credit union is ‘undercapitalized’ if—

(i) it has a net worth ratio of less than 6 percent; or

(ii) it fails to meet any applicable risk-based net worth requirement under subsection (d).

(D) Significantly undercapitalized.— An insured credit union is ‘significantly undercapitalized’—

(i) if it has a net worth ratio of less than 4 percent; or

(ii) if—

(I) it has a net worth ratio of less than 5 percent; and

(II) it—

(aa) fails to submit an acceptable net worth restoration plan within the time allowed under subsection (f); or

(bb) materially fails to implement a net worth restoration plan accepted by the Board.

(E) Critically undercapitalized.— An insured credit union is ‘critically undercapitalized’ if it has a net worth ratio of less than 2 percent (or such higher net worth ratio, not to exceed 3 percent, as the Board may specify by regulation).

(2) Adjusting net worth levels.—

(A) In general.—If, for purposes of section 38(c) of the Federal Deposit Insurance Act, the Federal banking agencies increase or decrease the required minimum level for the leverage limit (as those terms are used in section 38), the Board may, by regulation, and subject to subparagraph (B) of this paragraph, correspondingly increase or decrease 1 or more of the net worth ratios specified in subparagraphs (A) through (D) of paragraph (1) of this subsection in an amount that is equal to not more than the difference between the required minimum level most recently established by the Federal banking agencies and 4 percent of total assets (with respect to institutions regulated by those agencies).

(B) Determinations required.— The Board may increase or decrease net worth ratios under subparagraph (A) only if the Board—

(i) determines, in consultation with the Federal banking agencies, that the reason for the increase or decrease in the required minimum level for the leverage limit also justifies the adjustment in net worth ratios; and

(ii) determines that the resulting net worth ratios are sufficient to carry out the purpose of this section.

(C) Transition period required.—If the Board increases any net worth ratio under this paragraph, the Board shall give insured credit unions a reasonable period of time to meet the increased ratio.

(d) Risk-Based Net Worth Requirement for Complex Credit Unions.—

(1) In general.—The regulations required under subsection (b)(1) shall include a risk-based net worth requirement for insured credit unions that are complex, as defined by the Board based on the portfolios of assets and liabilities of credit unions.

(2) Standard.—The Board shall design the risk-based net worth requirement to take account of any material risks against which the net worth ratio required for an insured credit union to be adequately capitalized may not provide adequate protection.

(e) Earnings-Retention Requirement Applicable to Credit Unions That Are Not Well Capitalized.—

(1) In general.—An insured credit union that is not well capitalized shall annually set aside as net worth an amount equal to not less than 0.4 percent of its total assets.

(2) Board's authority to decrease earnings-retention requirement.—

(A) In general.—The Board may, by order, decrease the 0.4 percent requirement in paragraph (1) with respect to a credit union to the extent that the Board determines that the decrease—

(i) is necessary to avoid a significant redemption of shares; and

(ii) would further the purpose of this section.

(B) Periodic review required.— The Board shall periodically review any order issued under subparagraph (A).

(f) Net Worth Restoration Plan Required.—

(1) In general.—Each insured credit union that is undercapitalized shall submit an acceptable net worth restoration plan to the Board within the time allowed under this subsection.

(2) Assistance to small credit unions.— The Board (or the staff of the Board) shall, upon timely request by an insured credit union with total assets of less than \$10,000,000, and subject to such regulations or guidelines as the Board may prescribe, assist that credit union in preparing a net worth restoration plan.

(3) Deadlines for submission and review of plans.—The Board shall, by regulation, establish deadlines for submission of net worth restoration plans under this subsection that—

(A) provide insured credit unions with reasonable time to submit net worth restoration plans; and

- (B) require the Board to act on net worth restoration plans expeditiously.
- (4) Failure to submit acceptable plan within time allowed.—
 - (A) Failure to submit any plan.—If an insured credit union fails to submit a net worth restoration plan within the time allowed under paragraph (3), the Board shall—
 - (i) promptly notify the credit union of that failure; and
 - (ii) give the credit union a reasonable opportunity to submit a net worth restoration plan.
 - (B) Submission of unacceptable plan.—If an insured credit union submits a net worth restoration plan within the time allowed under paragraph (3), and the Board determines that the plan is not acceptable, the Board shall—
 - (i) promptly notify the credit union of why the plan is not acceptable; and
 - (ii) give the credit union a reasonable opportunity to submit a revised plan.
- (5) Accepting plan.—The Board may accept a net worth restoration plan only if the Board determines that the plan is based on realistic assumptions and is likely to succeed in restoring the net worth of the credit union.
- (g) Restrictions on Undercapitalized Credit Unions.—
 - (1) Restriction on asset growth.—An insured credit union that is undercapitalized shall not generally permit its average total assets to increase, unless—
 - (A) the Board has accepted the net worth restoration plan of the credit union for that action;
 - (B) any increase in total assets is consistent with the net worth restoration plan; and
 - (C) the net worth ratio of the credit union increases at a rate that is consistent with the net worth restoration plan.
 - (2) Restriction on member business loans.—Notwithstanding section 107A(a), an insured credit union that is undercapitalized may not make any increase in the total amount of member business loans (as defined in section 107A(c)) outstanding at that credit union at any one time, until such time as the credit union becomes adequately capitalized.
- (h) More Stringent Treatment Based on Other Supervisory Criteria.—With respect to the exercise of authority by the Board under regulations comparable to section 38(g) of the Federal Deposit Insurance Act—
 - (1) the Board may not reclassify an insured credit union into a lower net worth category, or treat an insured credit union as if it were in a lower net worth category, for reasons not pertaining to the safety and soundness of that credit union; and
 - (2) the Board may not delegate its authority to reclassify an insured credit union into a lower net worth category or to treat an insured credit union as if it were in a lower net worth category.
- (i) Action Required Regarding Critically Under-capitalized Credit Unions.—
 - (1) In general.—The Board shall, not later than 90 days after the date on which an insured credit union becomes critically undercapitalized—
 - (A) appoint a conservator or liquidating agent for the credit union; or
 - (B) take such other action as the Board determines would better achieve the purpose of this section, after documenting why the action would better achieve that purpose.
 - (2) Periodic redeterminations required.—Any determination by the Board under paragraph (1)(B) to take any action with respect to an insured credit union in lieu of appointing a conservator or liquidating agent shall cease to be effective not later than the end of the 180-day period beginning on the date on which the determination is made, and a conservator or liquidating agent shall be appointed for that credit union under paragraph (1)(A), unless the Board makes a new determination under paragraph (1)(B) before the end of the effective period of the prior determination.
 - (3) Appointment of liquidating agent required if other action fails to restore net worth.—
 - (A) In general.—Notwithstanding paragraphs (1) and (2), the Board shall appoint a liquidating agent for an insured credit union if the credit union is critically undercapitalized

on average during the calendar quarter beginning 18 months after the date on which the credit union became critically undercapitalized.

(B) Exception.—Notwithstanding subparagraph (A), the Board may continue to take such other action as the Board determines to be appropriate in lieu of appointment of a liquidating agent if—

(i) the Board determines that—

(I) the insured credit union has been in substantial compliance with an approved net worth restoration plan that requires consistent improvement in the net worth of the credit union since the date of the approval of the plan; and

(II) the insured credit union has positive net income or has an upward trend in earnings that the Board projects as sustainable; and

(ii) the Board certifies that the credit union is viable and not expected to fail.

(4) Nondelegation.—

(A) In general.—Except as provided in subparagraph (B), the Board may not delegate the authority of the Board under this subsection.

(B) Exception.—The Board may delegate the authority of the Board under this subsection with respect to an insured credit union that has less than \$5,000,000 in total assets, if the Board permits the credit union to appeal any adverse action to the Board.

(j) Review Required When Fund Incurs Material Loss.—For purposes of determining whether the Fund has incurred a material loss with respect to an insured credit union (such that the inspector general of the Board must make a report), a loss is material if it exceeds the sum of—

(1) \$10,000,000; and

(2) an amount equal to 10 percent of the total assets of the credit union at the time at which the Board initiated assistance under section 208 or was appointed liquidating agent.

(k) Appeals Process.—Material supervisory determinations, including decisions to require prompt corrective action, made pursuant to this section by Administration officials other than the Board may be appealed to the Board pursuant to the independent appellate process required by section 309 of the Riegle Community Development and Regulatory Improvement Act of 1994 (or, if the Board so specifies, pursuant to separate procedures prescribed by regulation).

(l) Consultation and Cooperation With State Credit Union Supervisors.—

(1) In general.—In implementing this section, the Board shall consult and seek to work cooperatively with State officials having jurisdiction over State-chartered insured credit unions.

(2) Evaluating net worth restoration plan.—In evaluating any net worth restoration plan submitted by a State-chartered insured credit union, the Board shall seek the views of the State official having jurisdiction over the credit union.

(3) Deciding whether to appoint conservator or liquidating agent.—With respect to any decision by the Board on whether to appoint a conservator or liquidating agent for a State-chartered insured credit union—

(A) the Board shall—

(i) seek the views of the State official having jurisdiction over the credit union; and

(ii) give that official an opportunity to take the proposed action;

(B) the Board shall, upon timely request of an official referred to in subparagraph (A), promptly provide the official with—

(i) a written statement of the reasons for the proposed action; and

(ii) reasonable time to respond to that statement;

(C) if the official referred to in subparagraph (A) makes a timely written response that disagrees with the proposed action and gives reasons for that disagreement, the Board

shall not appoint a conservator or liquidating agent for the credit union, unless the Board, after considering the views of the official, has determined that—

(i) the Fund faces a significant risk of loss with respect to the credit union if a conservator or liquidating agent is not appointed; and

(ii) the appointment is necessary to reduce—

(I) the risk that the Fund would incur a loss with respect to the credit union; or

(II) any loss that the Fund is expected to incur with respect to the credit union; and

(D) the Board may not delegate any determination under subparagraph (C).

(m) Corporate Credit Unions Exempted.— This section does not apply to any insured credit union that—

(1) operates primarily for the purpose of serving credit unions; and

(2) permits individuals to be members of the credit union only to the extent that applicable law requires that such persons own shares.

(n) Other Authority Not Affected.—This section does not limit any authority of the Board or a State to take action in addition to (but not in derogation of) any action that is required under this section.

(o) Definitions.—For purposes of this section the following definitions shall apply:

(1) Federal banking agency.—The term ‘Federal banking agency’ has the same meaning as in section 3 of the Federal Deposit Insurance Act.

(2) Net worth.—The term ‘net worth’—

(A) with respect to any insured credit union, means the retained earnings balance of the credit union, as determined under generally accepted accounting principles, together with any amounts that were previously retained earnings of any other credit union with which the credit union has combined; and

(B) with respect to a low-income credit union, includes secondary capital accounts that are—

(i) uninsured; and

(ii) subordinate to all other claims against the credit union, including the claims of creditors, shareholders, and the Fund.

(3) Net worth ratio.—The term ‘net worth ratio’ means, with respect to a credit union, the ratio of the net worth of the credit union to the total assets of the credit union.

(4) New credit union.—The term ‘new credit union’ means an insured credit union that—

(A) has been in operation for less than 10 years; and

(B) has not more than \$10,000,000 in total assets.

Title III—Central Liquidity Facility

§ 1795 § 301

The Congress finds that the establishment of a National Credit Union Central Liquidity Facility is needed to improve general financial stability by meeting the liquidity needs of credit unions and thereby encourage savings, support consumer and mortgage lending, and provide basic financial resources to all segments of the economy.

§ 1795a § 302

Definitions.—As used in this title, the term—

(1) “liquidity needs” means the needs of credit unions primarily serving natural persons for—

(A) short-term adjustment credit available to assist in meeting temporary requirements for funds or to cushion more persistent outflows of funds pending an orderly adjustment of credit union assets and liabilities;

(B) seasonal credit available for longer periods to assist in meeting seasonal needs for funds arising from a combination of expected patterns of movement in share and deposit accounts and loans; and

(C) protracted adjustment credit available in the event of unusual or emergency circumstances of a longer term nature resulting from national, regional or local difficulties.

(2) "Central Liquidity Facility" or "Facility" means the National Credit Union Central Liquidity Facility;

(3) "paid-in and unimpaired capital and surplus" means the balance of the paid-in share accounts and deposits as of a given date, less any loss that may have been incurred for which there is no reserve or which has not been charged against undivided earnings, plus the credit balance (or less the debit balance) of the undivided earnings account as of a given date, after all losses have been provided for and net earnings or net losses have been added thereto or deducted therefrom.

Reserves shall not be considered as part of surplus, and (4) "member" means a Regular or an Agent member of the Facility.

§ 1795b § 303

National Credit Union Administration Central Liquidity Facility; establishment; management; jurisdiction.—There is hereby created the National Credit Union Administration Central Liquidity Facility.

The Central Liquidity Facility, an instrumentality of the United States, shall exist within the National Credit Union Administration and be managed by the Board.

The United States district court shall have original jurisdiction over any case to which the Board on behalf of the Facility is a party, without regard to the amount in controversy.

§ 1795c § 304

Membership.—(a) A credit union primarily serving natural persons may be a Regular member of the Facility by subscribing to the capital stock of the Facility in an amount not less than one-half of 1 per centum of the credit union's paid-in and unimpaired capital and surplus.

(b) A credit union or group of credit unions, primarily serving other credit unions, may be an Agent member of the Facility by—

(1) obtaining the approval of the Board;

(2) subscribing to the capital stock of the Facility in an amount not less than one-half of 1 per centum of the paid-in and unimpaired capital and surplus of all those credit unions which primarily serve natural persons, which are members of such credit union or of any credit union comprising such credit union group, and which are not regular members;

(3) agreeing to comply with rules and regulations the Board shall prescribe with respect to, but not limited to, management quality, asset and liability safety and soundness, internal operating and control practices and procedures, and participation of natural persons in the affairs of such credit union or credit union group; and

(4) agreeing to submit to the supervision of the Board which shall include, but not be limited to, reporting requirements and periodic unrestricted examinations.

(c) Stock subscriptions provided for in subsections

(a) and (b)(2) of this section shall be—

(1) based on an arithmetic average of paid-in capital and surplus over the six months preceding application and membership; and

(2) adjusted at the close of each calendar year in accordance with an arithmetic average of paid-in capital and surplus over a period determined by the Board.

(d) An Agent member of the Facility shall perform for its member credit unions those functions required by the Board to carry out this title.

- (e)(1) A member of the Facility whose capital stock subscription constitutes less than 5 per centum of such stock outstanding, may withdraw from membership in the Facility six months after notifying the Board of its intention to do so.
- (2) A member of the Facility whose capital stock subscription constitutes 5 per centum or more of such stock outstanding, may withdraw from membership in the Facility twenty-four months after notifying the Board of its intention to do so.
- (3) The Board may terminate membership in the Facility if, after opportunity for a hearing, the Board determines a member has failed to comply with any provision of this title or regulation issued pursuant thereto.

§ 1795d § 305

Capital stock.—

(a) As soon as practicable, the Board shall open books for subscriptions to the capital stock of the Facility. The minimum subscription shall be \$50.

(b) The capital stock of the Facility—

(1) shall be divided into shares having a par value of \$50 each;

(2) shall be paid for with cash or with securities of the United States or any Agency thereof in accordance with requirements the Board may impose;

(3) shall share in dividend distributions at rates determined by the Board. However, rates on the required capital stock shall be without preference; and

(4) shall not be transferred or hypothecated except as provided for herein.

(c) When circumstances require that all or a portion of a member's stock be redeemed by the Facility, the Board shall pay an amount equal to what the member originally paid for the stock less any amount owed by the member to the Facility.

(d) At least one-half of the payment for the subscription amount required for membership under section 304 of this title shall be transferred to the Facility. The remainder may be held by the member on call of the Board and shall be invested in assets designated by the Board.

(e) A credit union or credit union group that becomes a member of the Facility later than six months after the date the Board opens books for capital stock subscriptions may not borrow or receive advances from the Facility without approval by the Board for a period of six months after becoming a member.

§ 1795e § 306

Extensions of credit.—

(a)(1) A member may apply for an extension of credit from the Facility to meet its liquidity needs. The Board shall approve or deny any such application within five working days after receiving it.

The Board shall not approve an application for credit the intent of which is to expand credit union portfolios.

(2) The Board may advance funds to a member on terms and conditions prescribed by the Board after giving due consideration to creditworthiness.

(3) The Board shall not advance funds for the benefit of a credit union whose share or deposit accounts are insured by a State share or deposit guaranty credit union, insurance corporation, or guaranty association, without consultation with the appropriate State share or deposit guaranty credit union, insurance corporation, or guaranty association.

(b) The Secretary of the Treasury is authorized to lend to the Facility up to \$500,000,000, in the event the Board certifies to the Secretary that the Facility does not have sufficient funds to meet liquidity needs of credit unions. Any such loan shall bear an interest rate not greater than one-eighth of 1 per centum above the current average market yield on outstanding obligations of the United States with remaining time to maturity comparable to

the maturity of such loan. The authority of the Secretary to lend under this subsection shall be limited to such extent or in such amounts as are provided in advance in appropriation Acts.

§ 1795f § 307

Powers of the Board.—(a) The Board on behalf of the Facility shall have the ability to—

- (1) prescribe the manner in which the general business of the Facility shall be conducted;
 - (2) prescribe rules and regulations to carry out this title;
 - (3) determine the expenditures incurred by the Administration to carry out this title, and the expenditures incurred by the Facility to carry out titles I and II of this Act, and annually assess the Facility and the Administration accordingly;
 - (4) borrow from—
 - (A) any source, provided that the total face value of these obligations shall not exceed twelve times the subscribed capital stock and surplus of the Facility; and
 - (B) the National Credit Union Share Insurance Fund up to \$500,000 to defray initial organizational and operating expenses of the Facility at such rates and terms consistent with prevailing market conditions;
 - (5) guarantee performance of the terms of any financial obligation of a member but only when such obligation bears a clear and conspicuous notice on its face that only the resources of the Facility underlie such guarantee;
 - (6) purchase any asset from a member with the member's endorsement;
 - (7) invest in obligations of the United States or any agency thereof;
 - (8) make deposits in federally insured financial institutions and make investments in shares or deposits of credit unions;
 - (9) sue and be sued, complain, and defend, in any State or Federal court;
 - (10) adopt a seal;
 - (11) pursue to final disposition by way of compromise or otherwise claims both for and against the United States (other than tort claims, claims involving administrative expenses, and claims in excess of \$5,000 arising out of contracts for construction, repairs, and the purchase of supplies and materials) which are not in litigation and have not been referred to the Department of Justice;
 - (12) appoint officers and employees to assist in carrying out this title, who shall be appointed subject to the provisions of title 5, United States Code;
 - (13) conduct business, carry on operations, have offices, and exercise the powers granted by this title in any State or territory;
 - (14) lease, purchase, or otherwise acquire and own, hold, improve, use, or otherwise deal in and with property, real, personal, or mixed, or any interest therein, wherever situated;
 - (15) enter into contracts with any public or private organization, partnership, corporation, or individual;
 - (16) advance funds on a fully secured basis to a State credit union share or deposit insurance corporation, guaranty credit union, or guaranty association. Such advance shall not exceed twelve months in maturity, shall be relent at an interest rate not exceeding that imposed by the Facility, and shall not be renewable;
 - (17) exercise such incidental powers as shall be necessary or requisite to enable it to carry out effectively the purposes for which the Facility is incorporated; and
 - (18) advance funds to the National Credit Union Share Insurance Fund under such terms and conditions as may be established by the Board.
- (b)(1) The Board may authorize the Central Liquidity Facility or its agent members, subject to such rules and regulations, including definitions of terms used in this subsection, as the Board shall from time to time prescribe, to be drawees of, and to engage in, or be agents or intermediaries for, or otherwise participate or assist in, the collection and settlement of

(including presentment, clearing, and payment of, and remitting for), checks, share drafts, or any other negotiable or nonnegotiable items or instruments of payment drawn on or issued by members of the Central Liquidity Facility, any of its Agent members, or any other credit union eligible to become a member of the Central Liquidity Facility, and to have such incidental powers as the Board shall find necessary for the exercise of any such authorization.

(2) The Central Liquidity Facility or its Agent members shall make charges, to be determined and regulated by the Board consistent with the principles set forth in section 11A(c) of the Federal Reserve Act, or utilize the services of, or act as agent for, or be a member of, a Federal Reserve bank, clearinghouse, or any other public or private financial institution or other agency, in the exercise of any powers or functions pursuant to this subsection.

(3) The Board is authorized, with respect to participation in the collection and settlement of any items by the Central Liquidity Facility or by its Agent members, and with respect to the collection and settlement (including payment by the payor institution) of items payable by members of the Central Liquidity Facility or of any of its Agent members, to prescribe rules and regulations regarding the rights, powers, responsibilities, duties, and liabilities, including standards relating thereto, of such entities and other parties to any such items or their collection and settlement. In prescribing such rules and regulations, the Board may adopt or apply, in whole or in part, general banking usage and practices, and, in instances or respects in which they would otherwise not be applicable, Federal Reserve regulations and operating letters, the Uniform Commercial Code, and clearinghouse rules.

§ 1795g § 308

Depositories, custodians, and fiscal agents.—The Federal Reserve Banks are authorized to act as depositories, custodians and/or fiscal agents for the Central Liquidity Facility in the general performance of its powers conferred by this title. Each Federal Reserve Bank when designated by the Board as fiscal agent for the Central Liquidity Facility, shall be entitled to be reimbursed for all expenses incurred as such fiscal agent.

§ 1795h § 309

Audit of financial transactions.—The Comptroller General of the United States shall audit the Central Liquidity Facility under such rules and regulations as the Comptroller may prescribe.

§ 1795i § 310

Annual report.—The annual report required by section 102(d) shall include a full report of the activities of the Facility.

§ 1795j § 311

Agent of the Federal Reserve System.— The Facility is authorized to act upon the request of the Board of Governors of the Federal Reserve System as an agent of the Federal Reserve System in matters pertaining to credit unions under such terms and conditions as may be established by the Board of Governors of the Federal Reserve System.

§ 1795k § 312

State and local tax exemption.—(a) The Central Liquidity Facility, and its franchise, activities, capital reserves, surplus, and income, shall be exempt from all State and local taxation now or hereafter imposed, other than taxes on real property held by the Facility (to the same extent, according to its value, as other similar property held by other persons is taxed).

(b)(1) Except as provided in paragraph (2), the notes, bonds, debentures, and other obligations issued on behalf of the Central Liquidity Facility and the income therefrom shall be exempt from all State and local taxation now or hereafter imposed.

(2) Any obligation described in paragraph (1) shall not be exempt from State or local gift, estate, inheritance, legacy, succession, or other wealth transfer taxes.

(c) For purposes of this section—

(1) the term “State” includes the District of Columbia; and

(2) taxes imposed by counties or municipalities, or any territory, dependency, or possession of the United States shall be treated as local taxes.

INDEX

Account, defined, § 1752(5)

Agents, designation of for voting purposes, § 1760.

Allotment of space in federal buildings, § 1770.

Annual Audit, supervisory committee, § 1761d.

Application for membership, action upon by board of directors, § 1761b.

Appointment of NCUA Board, § 102(b).

Apportionment, § 1773.

Assets, power to sell all or part to another credit union, § 1757(14).

Audit requirements, §§ 1761d, 1782(a)(6).

Board of directors, § 1761, 1761b, 1761a.

Approval of loans to other credit unions, § 1757(5)(C).

Criteria established by, loans to members, § 1757(5)(A).

Dividends, declaration of, § 1763.

Investments, authorization to make, § 1757(7).

Meetings, § 1761b.

Bonds, Officers or employees, custody or handling of funds, § 1761b.

Treasurer, § 1761a.

Books and records, Audit, § 1761d.

Voluntary liquidation, possession under rules and regulations of Board, § 1766.

Borrowing, § 1757(9); from Central Liquidity Facility, § 1783(f).

Branch, defined, § 1752.

By-laws, § 1758.

Capacity to sue and be sued, § 1757(2).

Capitalization (well, adequately and under capitalized), § 1790d.

Cease-and-desist orders, § 1786.

Central credit union, shares or deposits of, investment of funds, § 1757(7)(G).

Central Liquidity Facility, Agent member,

“Member” as including § 1795a.

Qualifications, § 1795c.

Agent of Federal Reserve System, § 1795j.

Audit of financial transactions, § 1795h.

Board, powers on behalf of Facility, § 1795f.

Capital stock, subscription to, § 1795d.

Condition of membership, § 1795c.

Collection and settlement of checks, share drafts, etc., authorization by Board, § 1795f(b).

Definitions, § 1795a.

District courts, jurisdiction, cases to which Board is party on behalf of Facility, § 1795b.

Dividend distributions, without preference, rates determined by Board, § 1795d.

Establishment, § 1795b.

Extensions of credit, application, § 1795e.

Federal Reserve banks, depositories, custodians and financial agents for Facility, § 1795g.
 Interest rates on loans, agent members, § 1757.
 Investment by credit unions in stock of, § 1757.
 Liquidity needs, defined, § 1795a.
 Member, defined, § 1795a.
 Membership, § 1795c.
 National Credit Union Administration, Board, powers and duties, § 1795c(e).
 National Credit Union Share Insurance Fund, borrowing from by Board on behalf of Facility, § 1795f(a)(4).
 Paid-in and unimpaired capital and surplus, defined, § 1795a.
 Powers, § 1795f.
 Regular member, "Member" as including, § 1795a.
 Qualifications, § 1795c.
 Reports, annual report, § 1795i.
 Secretary of Treasury, as authorized lender, § 1795e(b).
 Tax exemption, § 1795k.
 Charter, Approval of organization certificate, § 1754.
 Conversion from or to state credit union, § 1771.
 Suspension or revocation, By Board, § 1766.
 Failure to file applications for insurance after expiration of two year period, § 1781.
 Civil money penalties, § 1786(k)(2).
 Common bond, § 109.
 Community development revolving loan fund, § 1772c-1.
 Compensation, Members of board or committees, § 1761.
 Officers, § 1761a.
 Reasonable health and accident insurance not considered compensation, § 1761.
 Conditional gifts, acceptance of, § 1772a.
 Conservatorship, §§ 1786h, 1787.
 Contracts, power to make, § 1757(1).
 Conversion, From federal to state credit union and vice versa, § 1771.
 From insured credit union to mutual savings bank, § 1785(b)(2)
 Credit committee, § 1761c.
 Credit union service organizations, § 1757(7)(I).
 Loans to, § 1757(5)(D).
 Demand deposit accounts, Credit unions authorized by Defense Department with suboffices in military installations in foreign countries or trust territories, § 1757(8).
 Depositories and fiscal agents of U.S., § 1767.
 Deposits in national banks, etc., § 1757(8).
 Disapproval of officials and senior employees, § 1790.
 Dividends, § 1763.
 Shares, share certificates and share draft accounts, payment, etc., § 1763.
 Election, board of directors, § 1761.
 Eligible obligations, power to purchase, sell, etc., § 1757(13).
 Examination, Books and records, § 1756.
 Insured credit unions, § 1784.
 Supervisory committee, § 1761d.
 Executive committee, § 1761b.
 Expulsion of members, § 1764.
 Federal buildings, allotment of space, § 1770.
 Fees, § 1755.

Fiscal agents and depositories, § 1767.
 Fiscal year, § 1760.
 Flood insurance compliance, § 1784e.
 Foreign investigations, §§ 1786(u), 1787(r).
 Fraudulent transfers, § 1787(b)(16).
 Gifts, Board's acceptance, § 1772a.
 Conditional gifts, acceptance, § 1772a.
 Deposit of gifts, § 1772a.
 Golden parachutes, § 1786(t).
 Government-sponsored enterprise, prohibition, § 1781(e).
 Gross income, determination, time for, § 1762.
 Institution-affiliated party, defined, § 1786(r).
 Insurance of member accounts, Eligibility, § 1781.
 Premium, § 1782.
 NCUSIF, § 1783.
 Other requirements, § 1785.
 Termination, § 1786.
 Payment on liquidation, § 1787.
 Special assistance, § 1788.
 Insurance year, defined, administration of insurance fund, share insurance, § 1782.
 Investments, § 1757(7), (15).
 Involuntary liquidation, § 1766(b).
 Joint tenancy, in shares, § 1759.
 Late charges, § 1757(10).
 Lines of credit, Application for, consideration, approval, etc., § 1761c.
 Board of directors, powers, etc., concerning, § 1757(5)(A).
 Liquidating agents, §§ 1766, 1787.
 Liquidations, §§ 1766, 1787.
 Loan officer, appointment, duty and powers, § 1761c.
 Loans, Amortization of loans, § 1757(5)(A)(9).
 Applications for, § 1761c.
 Authorized loans, § 1757(5)(A).
 Determination of amount, § 1761b.
 Maturity, § 1757(5).
 Participation loans, § 1757(5)(E).
 Power to make, § 1757(5).
 Rates, § 1757.
 Refunds, § 1761b.
 Residential real estate, limitations, § 1757(5)(A).
 Low-income members, nonmembers where credit unions served, payments on shares and share certificates received from officers, etc., of, § 1757(6).
 Management, § 1761.
 Meetings of members, § 1760.
 Election of board and committee, § 1761.
 Member accounts, defined, § 1752,
 Member business loans, § 107A.
 Membership, § 1759, 1761d.
 Election of board and committee at annual meeting, § 1761.
 Expulsion and withdrawal, § 1764.
 Mergers, emergency, § 1785(h).
 Minors as members, § 1765.

Mobile homes, loans to finance purchase of, criteria for making, § 1757(5)(A).
 Monetary transaction recordkeeping and reporting, § 1786(q)
 Money orders, power to sell to members, § 1757(12).
 National Credit Union Administration, "Administration," as meaning, § 1752a.
 Board, § 1752(a).
 Central Liquidity Facility, powers, duties, 97 etc., § 1795c et seq. Chairman, Spokesman of Board, powers and responsibilities, § 1752a.
 Composition, § 1752a.
 Conservatorship, § 1786h.
 Consultation, interest on loans, § 1757(5)(A).
 Financial reports to, § 1756.
 Financial transactions, audit, § 1752a.
 Management powers, membership, appointment, etc., § 1752a.
 Meetings, § 1752a.
 Members, appointment, § 1752a.
 Minutes of proceedings, § 1752a.
 Place of conducting audit of financial transactions, § 1752a.
 Powers, § 1766, § 1789.
 Quorum, § 1752a.
 Records, proceedings, § 1752a.
 Reports, operations of, § 1752a.
 NCUA Board as conservator or liquidating agent, § 1787.
 NCUA staff, § 1766(j).
 Negotiable checks, power to sell to members, § 1757(12).
 Net worth ratios, § 1790d.
 Nonmember units of federal, state, or local governments, etc., payment on shares and share certificates from officers, of, § 1757(6).
 Nonmembers, payment on shares, etc., receipt from, credit union serving predominantly low-income members, § 1757(6).
 Officers, § 1761, § 1761a.
 Suspension, § 1761d.
 Once a member—retention of membership, § 1759(e)(2).
 One year restriction on certain federal examiners, § 1786(w).
 Operating fee, assessment, computation, § 1755.
 Orders, § 1786.
 Organization certificate, § 1753.
 Approval, § 1754.
 Conversion from state credit union, § 1771.
 District of Columbia credit unions, converting to federal status, § 1773.
 Form prepared by board, § 1758.
 Partial invalidity, effect, § 1769.
 Participation loans with other credit unions, § 1757(5)(E).
 Powers, § 1757.
 Premiums, for share insurance, § 1782.
 One percent deposit, § 1782(c).
 Prohibition on acquisition of assets, § 1787(q).
 Prohibition on participation, § 1785(d).
 Prompt corrective action, § 1790d.
 Property, Power to purchase, hold and dispose of, § 1757(4).
 Proxy voting, § 1760.
 Public disclosure of agency action, § 1786(s).

Public money, credit unions as depositories for, § 1789a.
 Puerto Rico, Applicability of Federal Credit Union Act, § 1772.
 “Branch” as including branch place of business located in, § 1752.
 Conversion from or to state credit union, § 1771.
 Purchase and assumption, § 1785i.
 Purchase of liquidating notes, § 1757(13).
 Removal, prohibition or suspension from office, § 1786(g).
 Reports, § 1756.
 Annual audit by supervisory committee, § 1761d.
 Books and records, forms by Board, § 1766.
 Residential real estate loans, criteria for making, § 1757(5).
 Revocation of charter, § 1766.
 Rewards for information, § 1790c.
 Seal, § 1757(3).
 Secretary of Treasury, designation as fiscal agent and depositor, § 1767.
 Separability of provisions, right to alter, amend or repeal chapter, § 1769.
 Share certificate, § 1757(6).
 Member account and account as meaning, § 1752.
 Receiving payment on from officers, etc., of governmental units, etc., § 1757(6).
 Share draft account, § 1757(6).
 Dividends paid on, § 1763.
 “Member account” as meaning, general provisions, § 1752.
 Receipt of payments on, § 1757(6).
 Shares, § 1757(6).
 Right of survivorship, § 1759.
 Supervisory committee, § § 1761, 1761d.
 Appointment, § 1761.
 Audit, § 1761d.
 Suspension, Charter, § 1766.
 Officers or members of board of directors or committees, § 1761d.
 Taxation, exemptions from, § 1768.
 Termination of insurance for money laundering, § 1786(v).
 Territories, applicability of Federal Credit Union Act, § 1772.
 Time, declaration of dividends, § 1763.
 Transfer of functions, etc., of Bureau to National Credit Union Administration, § 1752a note.
 Treasurer of United States, deposit and investment of fees, § 1755.
 Treasury Department, consultation with Board, interest rates on loans, § 1757(5)(A).
 Treasury of the United States, gifts deposited, § 1772a.
 Trust fund, § 1774.
 Trust territories, Applicability of Federal Credit Union Act, § 1772.
 “Branch” as including suboffice on American military installation in, § 1752.
 Unsecured loans, limit, § 1761c.
 Vacancies, Board and credit committee, § 1761b.
 Supervisory committee, § 1761.
 Voluntary liquidation, § 1766.
 Whistleblower protection, § 1790.
 Withdrawal of members, § 1764.

<http://www.sba.gov/content/cooperative>

- **UNITED STATES CODE**
TITLE 26 - INTERNAL REVENUE CODE
SUBTITLE A - INCOME TAXES
CHAPTER 1 - NORMAL TAXES AND SURTAXES
SUBCHAPTER F - EXEMPT ORGANIZATIONS
PART IV - FARMERS' COOPERATIVES

§ 521 - EXEMPTION OF FARMERS' COOPERATIVES FROM TAX

a) Exemption from tax

A farmers' cooperative organization described in subsection (b)(1) shall be exempt from taxation under this subtitle except as otherwise provided in part I of subchapter T (sec. 1381 and following). Notwithstanding part I of subchapter T (sec. 1381 and following), such an organization shall be considered an organization exempt from income taxes for purposes of any law which refers to organizations exempt from income taxes.

(b) Applicable rules

(1) Exempt farmers' cooperatives

The farmers' cooperatives exempt from taxation to the extent provided in subsection (a) are farmers', fruit growers', or like associations organized and operated on a cooperative basis

(A) for the purpose of marketing the products of members or other producers, and turning back to them the proceeds of sales, less the necessary marketing expenses, on the basis of either the quantity or the value of the products furnished by them, or

(B) for the purpose of purchasing supplies and equipment for the use of members or other persons, and turning over such supplies and equipment to them at actual cost, plus necessary expenses.

(2) Organizations having capital stock

Exemption shall not be denied any such association because it has capital stock, if the dividend rate of such stock is fixed at not to exceed the legal rate of interest in the State of incorporation or 8 percent per annum, whichever is greater, on the value of the consideration for which the stock was issued, and if substantially all such stock (other than nonvoting preferred stock, the owners of which are not entitled or permitted to participate, directly or indirectly, in the profits of the association, upon dissolution or otherwise, beyond the fixed dividends) is owned by producers who market their products or purchase their supplies and equipment through the association.

(3) Organizations maintaining reserve

Exemption shall not be denied any such association because there is accumulated and maintained by it a reserve required by State law or a reasonable reserve for any necessary purpose.

(4) Transactions with nonmembers

Exemption shall not be denied any such association which markets the products of nonmembers in an amount the value of which does not exceed the value of the products marketed for members, or which purchases supplies and equipment for nonmembers in an amount the value of which does not exceed the value of the supplies and equipment purchased for members, provided the value of the purchases made for persons who are neither members nor producers does not exceed 15 percent of the value of all its purchases.

(5) Business for the United States

Business done for the United States or any of its agencies shall be disregarded in determining the right to exemption under this section.

(6) Netting of losses

Exemption shall not be denied any such association because such association computes its net earnings for purposes of determining any amount available for distribution to patrons in the manner described in paragraph (1) of section 1388 (j).

(7) Cross reference

For treatment of value-added processing involving animals, see section 1388 (k).

SUBCHAPTER T - COOPERATIVES AND THEIR PATRONS

PART I - TAX TREATMENT OF COOPERATIVES

§ 1381 - ORGANIZATIONS TO WHICH PART APPLIES

(a) In general

This part shall apply to—

(1) any organization exempt from tax under section 521 (relating to exemption of farmers' cooperatives from tax), and

(2) any corporation operating on a cooperative basis other than an organization—

(A) which is exempt from tax under this chapter,

(B) which is subject to the provisions of—

(i) part II of subchapter H (relating to mutual savings banks, etc.), or

(ii) subchapter L (relating to insurance companies), or

(C) which is engaged in furnishing electric energy, or providing telephone service, to persons in rural areas.

(b) Tax on certain farmers' cooperatives

An organization described in subsection (a)(1) shall be subject to the taxes imposed by section 11 or 1201.

(c) Cross reference

For treatment of income from load loss transactions of organizations described in subsection (a)(2)(C), see section 501 (c)(12)(H).

§ 1382 - TAXABLE INCOME OF COOPERATIVES

(a) Gross income

Except as provided in subsection (b), the gross income of any organization to which this part applies shall be determined without any adjustment (as a reduction in gross receipts, an increase in cost of goods sold, or otherwise) by reason of any allocation or distribution to a patron out of the net earnings of such organization or by reason of any amount paid to a patron as a per-unit retain allocation (as defined in section 1388 (f)).

(b) Patronage dividends and per-unit retain allocations

In determining the taxable income of an organization to which this part applies, there shall not be taken into account amounts paid during the payment period for the taxable year—

(1) as patronage dividends (as defined in section 1388 (a)), to the extent paid in money, qualified written notices of allocation (as defined in section 1388 (c)), or other property (except nonqualified written notices of allocation (as defined in section 1388 (d))) with respect to patronage occurring during such taxable year;

(2) in money or other property (except written notices of allocation) in redemption of a nonqualified written notice of allocation which was paid as a patronage dividend during the payment period for the taxable year during which the patronage occurred;

(3) as per-unit retain allocations (as defined in section 1388 (f)), to the extent paid in money, qualified per-unit retain certificates (as defined in section 1388 (h)), or other property (except nonqualified per-unit retain certificates, as defined in section 1388 (i)) with respect to marketing occurring during such taxable year; or

(4) in money or other property (except per-unit retain certificates) in redemption of a nonqualified per-unit retain certificate which was paid as a per-unit retain allocation during the payment period for the taxable year during which the marketing occurred.

For purposes of this title, any amount not taken into account under the preceding sentence shall, in the case of an amount described in paragraph (1) or (2), be treated in the same manner as an item of gross income and as a deduction therefrom, and in the case of an amount described in paragraph (3) or (4), be treated as a deduction in arriving at gross income.

(c) Deduction for nonpatronage distributions, etc.

In determining the taxable income of an organization described in section 1381 (a)(1), there shall be allowed as a deduction (in addition to other deductions allowable under this chapter)—

(1) amounts paid during the taxable year as dividends on its capital stock; and

(2) amounts paid during the payment period for the taxable year—

(A) in money, qualified written notices of allocation, or other property (except nonqualified written notices of allocation) on a patronage basis to patrons with respect to its earnings during such taxable year which are derived from business done for the United States or any of its agencies or from sources other than patronage, or

(B) in money or other property (except written notices of allocation) in redemption of a nonqualified written notice of allocation which was paid, during the payment period for the taxable year during which the earnings were derived, on a patronage basis to a patron with respect to earnings derived from business or sources described in subparagraph (A).

(d) Payment period for each taxable year

For purposes of subsections (b) and (c)(2), the payment period for any taxable year is the period beginning with the first day of such taxable year and ending with the fifteenth day of the ninth month following the close of such year. For purposes of subsections (b)(1) and (c)(2)(A), a qualified check issued during the payment period shall be treated as an amount paid in money during such period if endorsed and cashed on or before the 90th day after the close of such period.

(e) Products marketed under pooling arrangements

For purposes of subsection (b), in the case of a pooling arrangement for the marketing of products—

(1) the patronage shall (to the extent provided in regulations prescribed by the Secretary) be treated as patronage occurring during the taxable year in which the pool closes, and

(2) the marketing of products shall be treated as occurring during any of the taxable years in which the pool is open.

(f) Treatment of earnings received after patronage occurred

If any portion of the earnings from business done with or for patrons is includible in the organization's gross income for a taxable year after the taxable year during which the patronage occurred, then for purposes of applying paragraphs (1) and (2) of subsection (b) to such portion the patronage shall, to the extent provided in regulations prescribed by the Secretary, be considered to have occurred during the taxable year of the organization during which such earnings are includible in gross income.

(g) Use of completed crop pool method of accounting

(1) In general

An organization described in section 1381 (a) which is engaged in pooling arrangements for the marketing of products may compute its taxable income with respect to any pool opened prior to March 1, 1978, under the completed crop pool method of accounting if—

(A) the organization has computed its taxable income under such method for the 10 taxable years ending with its first taxable year beginning after December 31, 1976, and
(B) with respect to the pool, the organization has entered into an agreement with the United States or any of its agencies which includes provisions to the effect that—

(i) the United States or such agency shall provide a loan to the organization with the products comprising the pool serving as collateral for such loan,

(ii) the organization shall use an amount equal to the proceeds of such loan to make price support advances to eligible producers (as determined by the United States or such agency), to defray costs of handling, processing, and storing such products, or to pay all or part of any administrative costs associated with the price support program,

(iii) an amount equal to the net proceeds (as determined under such agreement) from the sale or exchange of the products in the pool shall be used to repay such loan until such loan is repaid in full (or all the products in the pool are disposed of), and

(iv) the net gains (as determined under such agreement) from the sale or exchange of such products shall be distributed to eligible producers, except to the extent that the United States or such agency permits otherwise.

(2) Completed crop pool method of accounting defined

For purposes of this subsection, the term “completed crop pool method of accounting” means a method of accounting under which gain or loss is computed separately for each crop year pool in the year in which the last of the products in the pool are disposed of.

§ 1383 - COMPUTATION OF TAX WHERE COOPERATIVE REDEEMS NONQUALIFIED WRITTEN NOTICES OF ALLOCATION OR NONQUALIFIED PER-UNIT RETAIN CERTIFICATES

(a) General rule

If, under section 1382 (b)(2) or (4), or (c)(2)(B), a deduction is allowable to an organization for the taxable year for amounts paid in redemption of nonqualified written notices of allocation or non-qualified per-unit retain certificates, then the tax imposed by this chapter on such organization for the taxable year shall be the lesser of the following:

(1) the tax for the taxable year computed with such deduction; or

(2) an amount equal to—

(A) the tax for the taxable year computed without such deduction, minus

(B) the decrease in tax under this chapter for any prior taxable year (or years) which would result solely from treating such nonqualified written notices of allocation or nonqualified per-unit retain certificates as qualified written notices of allocation or qualified per-unit retain certificates (as the case may be).

(b) Special rules

(1) If the decrease in tax ascertained under subsection (a)(2)(B) exceeds the tax for the taxable year (computed without the deduction described in subsection (a)) such excess shall be considered to be a payment of tax on the last day prescribed by law for the payment of tax for the taxable year, and shall be refunded or credited in the same manner as if it were an overpayment for such taxable year.

(2) For purposes of determining the decrease in tax under subsection (a)(2)(B), the stated dollar amount of any nonqualified written notice of allocation or nonqualified per-unit retain certificate which is to be treated under such subsection as a qualified written notice of allocation or qualified per-unit retain certificate (as the case may be) shall be the amount paid in redemption of such written notice of allocation or per-unit retain certificate which is allowable as a deduction under section 1382 (b)(2) or (4), or (c)(2)(B) for the taxable year.

(3) If the tax imposed by this chapter for the taxable year is the amount determined under subsection (a)(2), then the deduction described in subsection (a) shall not be taken into account for any purpose of this subtitle other than for purposes of this section.

4.18. FRANCIA

LEY 47-1775

Le 12 juillet 2013

LOI

Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Version consolidée au 22 juillet 2013

Titre Ier : Dispositions générales.

Article 1

· Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 1 JORF 14 juillet 1992

Les coopératives sont des sociétés dont les objets essentiels sont :

1° De réduire, au bénéfice de leurs membres et par l'effort commun de ceux-ci, le prix de revient et, le cas échéant, le prix de vente de certains produits ou de certains services, en assumant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération grèverait ce prix de revient ;

2° D'améliorer la qualité marchande des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux consommateurs.

3° Et plus généralement de contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de leurs membres ainsi qu'à leur formation.

Les coopératives exercent leur action dans toutes les branches de l'activité humaine.

Article 2

· Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 2 JORF 14 juillet 1992

Les coopératives sont régies par la présente loi sous réserve des lois particulières à chaque catégorie d'entre elles.

Article 3

· Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 3 JORF 14 juillet 1992

Les coopératives ne peuvent admettre les tiers non sociétaires à bénéficier de leurs services, à moins que les lois particulières qui les régissent ne les y autorisent.

Si elles font usage de cette faculté, elles sont tenues de recevoir pour associés ceux qu'elles admettent à bénéficier de leur activité ou dont elles utilisent le travail et qui satisfont aux conditions fixées par leurs statuts.

Article 3 bis

· Créé par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 4 JORF 14 juillet 1992

Les coopératives peuvent admettre comme associés, dans les conditions fixées par leurs statuts, des personnes physiques ou morales qui n'ont pas vocation à recourir à leurs

services ou dont elles n'utilisent pas le travail mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de la coopérative.

Ces associés ne peuvent en aucun cas détenir ensemble plus de 35 p. 100 du total des droits de vote. Les statuts peuvent prévoir que ces associés ou certaines catégories d'entre eux disposent ensemble d'un nombre de voix proportionnel au capital détenu qu'ils se répartissent entre eux au prorata de la part de chacun dans ce dernier.

Toutefois, lorsque au nombre de ces associés figurent des sociétés coopératives, la limite ci-dessus est portée à 49 p. 100 sans que les droits de ces associés autres que les coopératives puissent excéder la limite de 35 p. 100.

Lorsque la part de capital que détiennent les associés définis au premier alinéa excède, selon le cas, 35 p. 100 ou 49 p. 100 du total des droits de vote, le nombre de voix attribué à chacun d'entre eux est réduit à due proportion.

Les statuts fixent la quotité maximale du capital que peuvent détenir les associés mentionnés au premier alinéa.

Article 4

Sauf dispositions contraires des lois particulières, présentes ou futures, les associés d'une coopérative disposent de droits égaux dans sa gestion et il ne peut être établi entre eux de discrimination suivant la date de leur adhésion.

Article 5

· Modifié par Loi n°85-703 du 12 juillet 1985 - art. 2 JORF 13 juillet 1985

Les coopératives peuvent constituer entre elles, pour la gestion de leurs intérêts communs, sous le nom d'unions de coopératives, des sociétés coopératives régies par la présente loi.

NOTA:

L'article 2 de la loi n° 85-703 du 12 juillet 1985 a abrogé l'article 67 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983.

Titre II : De l'organisation et de l'administration des coopératives.

Article 6

Les coopératives sont administrées par des mandataires nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des membres et révocables par elle.

Article 7

· Modifié par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 23

Les statuts des coopératives déterminent notamment le siège de la société, son mode d'administration, en particulier les décisions réservées à l'assemblée générale, les pouvoirs des administrateurs ou gérants, les modalités du contrôle exercé sur ses opérations au nom des associés, les formes à observer en cas de modification des statuts ou de dissolution. Ils fixent les conditions d'adhésion, de retraite et d'exclusion des associés, l'étendue et les modalités de la responsabilité qui incombe à chacun d'eux dans les engagements de la coopérative. Les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les articles L. 231-1 et suivants du code de commerce ne sont pas tenues de fixer dans leurs statuts le montant maximal que peut atteindre leur capital.

Article 8

- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 225 (V)
- Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 32

L'assemblée générale se réunit au moins une fois l'an pour prendre notamment connaissance du compte rendu de l'activité de la société, approuver les comptes de l'exercice écoulé et procéder, s'il y a lieu, aux élections d'administrateurs ou gérants et de commissaires aux comptes. Les statuts peuvent prévoir que ces désignations doivent être prononcées au scrutin secret.

Le compte rendu d'activité mentionné à l'alinéa précédent comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce.

Article 9

- Modifié par Loi n°83-657 du 20 juillet 1983 - art. 68 JORF 21 juillet 1983

Chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale, à moins que les lois particulières à la catégorie de coopératives intéressée n'en disposent autrement.

Les statuts des unions de coopératives peuvent attribuer à chacune des coopératives adhérentes un nombre de voix déterminé en fonction soit de l'effectif de ses membres, soit de l'importance des affaires traitées avec l'union et qui leur soit au plus proportionnel.

Les statuts des unions d'économie sociale visées à l'article 5 peuvent attribuer à chacun des associés un nombre de voix au plus proportionnel à l'effectif de leurs membres ou à l'importance des affaires qu'elles traitent avec l'union.

Néanmoins, des associés ont la faculté de se grouper afin de donner pouvoir à un mandataire pour les représenter.

NOTA:

L'article 68 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 insérant le 3ème alinéa a été abrogé par l'article 2 de la loi n° 85-703 du 12 juillet 1985.

Article 10

Sauf disposition contraire de la législation spéciale, les statuts peuvent admettre le vote par correspondance. Ils peuvent également décider que les associés seront répartis en sections délibérant séparément dont les délégués formeront l'assemblée générale de la coopérative.

Article 11

- Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 6 JORF 14 juillet 1992

Les parts sociales sont nominatives. Leur cession est soumise à l'approbation, soit de l'assemblée générale, soit des administrateurs ou gérants, dans les conditions fixées par les statuts.

Les statuts peuvent prévoir l'émission par la coopérative de parts sociales qui confèrent à leurs détenteurs des avantages particuliers.

Ils déterminent les avantages attachés à ces parts, dans le respect des principes coopératifs.

Ces parts ne peuvent être souscrites que par les associés. Elles sont librement négociables entre eux.

Article 11 bis

· Créé par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 7 JORF 14 juillet 1992

Les statuts peuvent prévoir la création de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote susceptibles d'être souscrites ou acquises par les associés visés à l'article 3 bis ou par des tiers non associés. Ils déterminent les avantages pécuniaires conférés à ces parts. Lorsque ces avantages ne sont pas intégralement versés pendant trois exercices consécutifs, les porteurs de ces parts acquièrent un droit de vote dans les limites fixées à l'article 3 bis de la présente loi.

Les titulaires de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote sont réunis en assemblée spéciale dans des conditions fixées par décret.
Tout titulaire de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote peut participer à l'assemblée spéciale. Toute clause contraire est réputée non écrite.

L'assemblée spéciale peut émettre un avis avant toute décision de l'assemblée générale. Elle statue alors à la majorité des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés. L'avis est transmis à la société. Il est porté à la connaissance de l'assemblée générale et consigné à son procès-verbal.

L'assemblée spéciale peut désigner un ou, si les statuts le prévoient, plusieurs mandataires chargés de représenter les porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote à l'assemblée générale des coopérateurs et, le cas échéant, d'y exposer leur avis avant tout vote de cette dernière. Cet avis est consigné au procès-verbal de l'assemblée générale.

Toute décision modifiant les droits des titulaires de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés.

Article 12

· Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 8 JORF 14 juillet 1992

Les parts sociales des coopératives qui sont constituées sous le régime de la présente loi doivent être libérées d'un quart au moins au moment de leur souscription et la libération du surplus doit être effectuée dans les délais fixés par les statuts sans pouvoir excéder cinq ans à partir de la date à laquelle la souscription est devenue définitive. Les parts émises en contrepartie d'apports en nature sont intégralement libérées dès leur émission.

La société a la faculté de renoncer à poursuivre le recouvrement des sommes exigibles à l'égard d'un associé. En ce cas, l'associé est exclu de plein droit après mise en demeure par lettre recommandée et à défaut de paiement dans les trois mois.

Article 13

· Modifié par Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V)

Dans les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce, la somme au-dessous de laquelle le capital ne saurait être réduit par la reprise des apports des associés sortants ne peut être inférieure au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les établissements de crédit coopératifs ou mutualistes constitués sous forme de sociétés à capital variable, le capital social ne peut être réduit par le remboursement des apports des sociétaires sortants au-dessous des trois quarts du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société sans l'autorisation préalable de l'organe central auquel l'établissement de crédit est affilié.

Article 14

· Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 10 JORF 14 juillet 1992

Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

Article 15

Nulle répartition ne peut être opérée entre les associés si ce n'est au prorata des opérations traitées avec chacun d'eux ou du travail fourni par lui.

Les excédents provenant des opérations effectuées avec des clients ne doivent pas être compris dans ces distributions.

Les directeurs ou gérants ne pourront être rémunérés au prorata des opérations effectuées ou des bénéfices réalisés que si ce mode de rémunération est prévu aux statuts, qui, dans ce cas, devront préciser que le conseil d'administration fixera, pour une durée n'excédant pas cinq ans, le maximum de rétribution annuelle.

Article 16

· Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 11 JORF 14 juillet 1992

Dans les limites et conditions prévues par la loi et les statuts, les sommes disponibles après imputation sur les excédents d'exploitation des versements aux réserves légales ainsi que des distributions effectuées conformément aux articles 11 bis, 14, 15, 18 et 19 nonies de la présente loi sont mises en réserve ou attribuées sous forme de subvention soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel.

Sauf dispositions contraires d'une législation particulière, tant que les diverses réserves totalisées n'atteignent pas le montant du capital social, le prélèvement opéré à leur profit ne peut être inférieur aux trois vingtièmes des excédents d'exploitation.

Les statuts de la coopérative peuvent autoriser l'assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites.

La première incorporation ne pourra porter que sur la moitié des réserves disponibles existant à la clôture de l'exercice précédant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l'incorporation, les incorporations ultérieures ne pouvant porter que sur la moitié de l'accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation.

Article 17

Les statuts peuvent prévoir qu'en cas d'insuffisance des résultats d'un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt statutaire afférent à cet exercice seront

prélevées soit sur les réserves, soit sur les résultats des exercices suivants, sans toutefois aller au delà du quatrième.

Article 18

· Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 12 JORF 14 juillet 1992

L'associé qui se retire ou qui est exclu, dans le cas où il peut prétendre au remboursement de ses parts, a droit au remboursement de leur valeur nominale.

Lorsqu'il ne prévoient pas le recours aux dispositions de l'article 16, les statuts peuvent prévoir que l'associé sortant ayant cinq ans d'ancienneté révolus a droit, en outre, en proportion de sa part de capital social et dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères, à une part de la réserve constituée à cet effet.

Le remboursement des parts de l'associé sortant et la part de la réserve visée à l'alinéa précédent sont réduits à due concurrence de la contribution de l'associé aux pertes inscrites au bilan. Toutefois, les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l'imputation des pertes, en premier lieu sur la réserve mentionnée ci-avant, et en second lieu sur les réserves statutaires.

Article 19

· Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 13 JORF 14 juillet 1992

En cas de dissolution et sous réserve des dispositions des lois spéciales, l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé sous réserve de l'application des dispositions des articles 16 et 18, est dévolu par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel.

Titre II bis.

Article 19 bis

· Modifié par Loi 92-121 1993-01-27 art. 64 JORF 30 janvier 1993

Les unions d'économie sociale régies par les dispositions de la présente loi sont des sociétés coopératives qui ont pour objet la gestion des intérêts communs de leurs associés et le développement de leurs activités.

Elles peuvent admettre comme associé toute personne physique ou morale. Toutefois, dans ces unions, 65 p. 100 au moins des droits de vote doivent être détenus par des sociétés coopératives, des mutuelles régies par le code de la mutualité, des organismes de mutualité agricole, des sociétés d'assurance à forme mutuelle, des sociétés d'assurances mutuelles et unions de mutuelles régies par le code des assurances, des associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des unions ou fédérations de ces sociétés ou associations.

Toutefois, les statuts peuvent admettre parmi les associés détenant 65 p. 100 des droits de vote des personnes morales à but non lucratif autres que celles visées à la deuxième phrase du deuxième alinéa.

La moitié au moins des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance doivent être élus parmi les représentants des personnes morales visées à la deuxième phrase du deuxième alinéa ci-dessus.

Les statuts des unions d'économie sociale peuvent attribuer à chaque associé un nombre de voix au plus proportionnel à l'effectif de ses membres ou à l'importance des affaires qu'il traite avec l'union.

Article 19 ter

· Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 15 JORF 14 juillet 1992

Les unions d'économie sociale peuvent admettre, dans les conditions de l'article 3 de la présente loi, des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation de leurs opérations. Cette faculté doit être mentionnée dans les statuts. Les opérations effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité séparée et ne peuvent excéder le cinquième du chiffre d'affaires de l'union. Toutefois, l'obligation de comptabilité séparée et le plafond du cinquième ne s'appliquent pas aux adhérents des personnes morales membres de l'union.

Si les comptes font apparaître un dépassement de cette proportion, l'union dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation.

Ces unions peuvent prendre des participations dans des sociétés ayant la forme commerciale ou un objet commercial.

Article 19 quater

· Créé par Loi n°85-703 du 12 juillet 1985 - art. 1 JORF 13 juillet 1985

Les unions d'économie sociale font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la coopération, détermine les modalités de mise en oeuvre de la procédure, dite de révision coopérative, définie à l'alinéa précédent ainsi que les conditions d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des principes coopératifs.

Titre II ter : La société coopérative d'intérêt collectif.

Article 19 quinquies

· Modifié par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 36 JORF 18 juillet 2001

Les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions de la présente loi, par le code de commerce.

Elles ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, qui présentent un caractère d'utilité sociale.

Article 19 sexies

· Modifié par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 36 JORF 18 juillet 2001

Les tiers non sociétaires peuvent bénéficier des produits et services de la société coopérative d'intérêt collectif.

Article 19 septies

· Modifié par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 36 JORF 18 juillet 2001

Peuvent être associés d'une société coopérative d'intérêt collectif :

- 1° Les salariés de la coopérative ;
- 2° Les personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative ;
- 3° Toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ;
- 4° Des collectivités publiques et leurs groupements ;
- 5° Toute personne physique ou morale qui contribue par tout autre moyen à l'activité de la coopérative.

La société coopérative d'intérêt collectif comprend au moins trois des catégories d'associés mentionnées ci-dessus, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles figurant aux 1° et 2°.

Les statuts déterminent les conditions d'acquisition et de perte de la qualité d'associé ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés pourront être tenus de demander leur admission en qualité d'associé.

Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir ensemble plus de 20 % du capital de chacune des sociétés coopératives d'intérêt collectif.

Article 19 octies

· Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 26

Chaque associé dispose d'une voie à l'assemblée générale ou, s'il y a lieu, dans le collège auquel il appartient.

Les statuts peuvent prévoir que les associés sont répartis en fonction de leur participation à l'activité de la coopérative ou de leur contribution à son développement, en trois ou plusieurs collèges.

Chaque collège dispose d'un nombre égal de voix à l'assemblée générale, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

Dans ce cas, les statuts déterminent la répartition des associés dans chacun des collèges et le nombre de voix dont disposent les collèges au sein de cette assemblée, sans toutefois qu'un collège puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieure à 10 % de ce total et sans que, dans ces conditions, l'apport en capital constitue un critère de pondération. Les statuts peuvent prévoir que le quorum nécessaire pour que les assemblées délibèrent valablement est déterminé en fonction du nombre d'associés présents ou représentés.

Article 19 nonies

· Modifié par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 36 JORF 18 juillet 2001

Les statuts déterminent la dotation annuelle à une réserve statutaire. Celle-ci ne peut être inférieure à 50 % des sommes disponibles après dotation aux réserves légales en application de l'article 16.

Le montant total de l'intérêt servi aux parts sociales ne peut excéder les sommes disponibles après les dotations prévues au premier alinéa du présent article.

Les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés à la société par les collectivités publiques, leurs groupements et les associations ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'intérêt versé aux parts sociales et, le cas échéant, des avantages ou intérêts servis en application des articles 11 et 11 bis.

L'article 15, les troisième et quatrième alinéas de l'article 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 ne sont pas applicables.

Article 19 decies (transféré)

- Créé par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 64 JORF 18 juin 1987

Article 19 decies

- Modifié par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 36 JORF 18 juillet 2001

Les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions aux sociétés coopératives d'intérêt collectif en vue de participer à leur développement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 19 undecies

- Modifié par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 36 JORF 18 juillet 2001

Tout associé peut être nommé en qualité de directeur ou de gérant, membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail. Les dispositions des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives d'intérêt collectif.

Article 19 duodecies

- Modifié par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 36 JORF 18 juillet 2001

La société coopérative d'intérêt collectif fait procéder périodiquement à l'examen de sa situation financière et de sa gestion dans des conditions fixées par décret.

Article 19 terdecies (abrogé)

- Créé par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 36 JORF 18 juillet 2001
- Abrogé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 26

Article 19 quaterdecies

- Créé par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 36 JORF 18 juillet 2001

La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent titre n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

Article 19 quindecies

- Créé par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 36 JORF 18 juillet 2001

La société coopérative d'intérêt collectif est éligible aux conventions, agréments et habilitations mentionnés à l'article L. 129-1, aux I et II de l'article L. 322-4-16, aux articles L. 322-4-16-3 et L. 322-4-18 du code du travail, au dernier alinéa de l'article L. 121-2, aux articles L. 222-3, L. 344-2 à L. 344-6, L. 345-1 à 345-3 et au 2° de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 140 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.

Les agréments, habilitations et conventions mentionnés à l'alinéa ci-dessus, ainsi que, s'il y a lieu, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit, sont délivrés à la société coopérative d'intérêt collectif ou conclues avec celle-ci, sous

réserve de la conformité de son objet statutaire et de ses règles d'organisation et de fonctionnement aux conditions législatives et réglementaires requises.

Titre II ter : Certificats coopératifs d'investissement. (abrogé)

Article 19 quinquies (transféré)

· Créé par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 64 JORF 18 juin 1987

Article 19 sexies (transféré)

· Créé par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 64 JORF 18 juin 1987

Article 19 septies (transféré)

· Créé par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 64 JORF 18 juin 1987

Article 19 octies (transféré)

· Créé par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 64 JORF 18 juin 1987

Article 19 nonies (transféré)

· Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 66 JORF 30 janvier 1993

Article 19 undecies (transféré)

· Créé par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 64 JORF 18 juin 1987

Titre II quater : Certificats coopératifs d'associés. (abrogé)

Article 19 duodecies (transféré)

· Créé par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 16 JORF 14 juillet 1992

Titre II quater : Certificats coopératifs d'investissement.

Article 19 sexdecies

· Modifié par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 14

Sauf disposition contraire des lois particulières à chaque catégorie de coopératives, l'assemblée générale extraordinaire des associés peut décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur celui des commissaires aux comptes ou, à défaut de commissaires aux comptes, dans les conditions prévues par l'alinéa 3 de l'article 53 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, l'émission de certificats coopératifs d'investissement représentatifs de droits pécuniaires attachés à une part de capital. Ces certificats sont des valeurs mobilières sans droit de vote.

Le contrat d'émission des certificats coopératifs d'investissement prévoit les modalités de rachat de ces titres.

Article 19 septdecies

· Transféré par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 36 JORF 18 juillet 2001

L'émission des certificats coopératifs d'investissement s'effectue par augmentation du capital atteint à la clôture de l'exercice précédant cette émission.

Les certificats coopératifs d'investissement ne peuvent représenter plus de la moitié du capital atteint à la clôture de l'exercice précédent.

Article 19 octodecies

- Transféré par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 36 JORF 18 juillet 2001

Les titulaires des certificats coopératifs d'investissement peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les associés.

Toute décision modifiant les droits des titulaires des certificats coopératifs d'investissement n'est définitive qu'après approbation de ces titulaires réunis en assemblée spéciale dans des conditions fixées par décret.

Article 19 novodecies

- Transféré par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 36 JORF 18 juillet 2001

Les certificats coopératifs d'investissement sont émis pour la durée de la société et sont librement négociables.

Article 19 vicies

- Transféré par Loi 2001-624 2001-07-17 art. 36 II, III et IV JORF 18 juillet 2001
- Transféré par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 36 JORF 18 juillet 2001

En fonction des résultats de l'exercice, l'assemblée générale annuelle fixe la rémunération des certificats coopératifs d'investissement.

Cette rémunération est au moins égale à celle versée aux parts sociales.

L'assemblée générale annuelle peut offrir aux titulaires de certificats coopératifs d'investissement, pour tout ou partie de la rémunération visée au premier alinéa, une option entre le paiement en numéraire et le paiement en certificats coopératifs d'investissement.

L'offre de paiement de la rémunération en certificats coopératifs d'investissement doit être faite simultanément à tous les titulaires de certificats coopératifs d'investissement. Le prix d'émission des certificats coopératifs d'investissement émis dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne peut être inférieur au nominal.

Dans les sociétés dont les certificats coopératifs d'investissement sont inscrits à la cote officielle ou à la cote du second marché, le prix d'émission ne peut être inférieur à 90 p. 100 de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision de mise en distribution diminuée du montant net de la rémunération.

Dans les autres sociétés, le prix d'émission est fixé soit à dire d'expert, soit en divisant par le nombre de certificats coopératifs d'investissement existants la fraction de l'actif net visée à l'article 19 duovicies et calculée d'après le dernier bilan approuvé par l'assemblée générale. L'application des règles de détermination du prix d'émission est vérifiée par le commissaire aux comptes qui présente un rapport spécial à l'assemblée générale annuelle.

Lorsque le montant de la rémunération à laquelle il a droit ne correspond pas à un nombre entier de certificats coopératifs d'investissement, le titulaire peut recevoir le nombre de certificats coopératifs d'investissement immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire ou, si l'assemblée générale l'a autorisé, le nombre de certificats coopératifs d'investissement immédiatement supérieur, en versant la différence en numéraire.

La demande du paiement de la rémunération en certificats coopératifs d'investissement, accompagnée le cas échéant du versement prévu à l'alinéa qui précède, doit intervenir dans un délai fixé par l'assemblée générale, sans excéder trois mois à compter de la date de ladite assemblée générale.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 19 octodécies ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale décide d'accorder simultanément à chaque titulaire de certificats coopératifs d'investissement et à chaque porteur de parts sociales, pour toute la rémunération qui leur est due, une option entre le paiement en numéraire ou le paiement respectivement en certificats coopératifs d'investissement ou en parts sociales.

NOTA:

Loi 96-597 1996-07-02 art. 96 III (Loi de modernisation des activités financières) :

"Dans les textes législatifs en vigueur non visés ci-dessus et les textes réglementaires, les dispositions applicables de manière identique à la cote officielle ou au second marché d'une bourse de valeurs s'appliquent aux marchés réglementés régis par la présente loi."

Article 19 unvicies

- Transféré par Loi 2001-624 2001-07-17 art. 36 II, III et IV JORF 18 juillet 2001
- Transféré par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 36 JORF 18 juillet 2001

En cas de nouvelles émissions de certificats coopératifs d'investissement, les titulaires de certificats déjà émis bénéficient d'un droit de souscription préférentiel à titre irréductible qui peut être supprimé par l'assemblée spéciale prévue à l'article 19 octodécies.

Article 19 duovicies

- Transféré par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 36 JORF 18 juillet 2001

Par dérogation à l'alinéa 3 de l'article 16 et à l'article 19 de la présente loi, les titulaires de certificats coopératifs d'investissement disposent d'un droit sur l'actif net dans la proportion du capital qu'ils représentent.

Titre II quinquies : Certificats coopératifs d'associés

Article 19 tervicies

- Modifié par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 15

Les statuts des établissements de crédit coopératif ou mutualiste peuvent prévoir l'émission de certificats coopératifs d'associés émis pour la durée de la société et conférant à leurs titulaires un droit sur l'actif net dans la proportion du capital qu'ils représentent. Ces titres ne peuvent être détenus que par les associés et les sociétaires des coopératives associées.

Les dispositions du titre II quater s'appliquent à ces certificats coopératifs d'associés. Ceux-ci ne peuvent être émis lorsque les statuts prévoient le recours aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 16. Les certificats coopératifs d'investissement, les certificats coopératifs d'associés et les parts à intérêt prioritaire ne peuvent représenter ensemble plus de 50 % du capital. Le contrat d'émission des certificats coopératifs d'associés prévoit les modalités de rachat de ces titres.

Titre III : Contrôle et sanctions.

Article 20

Dans le mois de leur constitution définitive, et avant toute opération, les coopératives qui ne sont pas soumises par la loi à un autre mode de publicité doivent déposer au greffe du tribunal d'instance de leur siège social, sur papier libre et en double exemplaire, leurs statuts accompagnés de la liste de leurs administrateurs, directeurs ou gérants avec l'indication de leurs professions et domiciles.

Les modifications apportées ultérieurement aux statuts ou à la liste visée ci-dessus, ainsi que les actes ou délibérations dont résulte la nullité ou la dissolution de la coopérative, ou qui fixent son mode de liquidation sont soumis au même dépôt dans un délai d'un mois à partir de leur date. En cas d'inobservation des formalités de dépôt, les actes ou délibérations qui auraient dû y être soumis sont inopposables aux tiers pour les actes antérieurs au dépôt.

Article 21

Il est donné sans frais récépissé des documents déposés. Un exemplaire en est transmis, par les soins du juge du tribunal d'instance, au greffe du tribunal de grande instance. Les documents déposés aux greffes du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance sont communiqués sans frais à tout requérant.

Article 22

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de sociétés qui se prévalent de la qualité de coopérative, la dénomination sociale, si elle ne comprend pas elle-même le mot de coopératif ou de coopérative, doit être accompagnée, outre les autres mentions éventuellement prescrites par la loi, des mots "société coopérative" suivis de l'indication de la nature de ses opérations et, éventuellement, de la profession commune des associés, le tout en caractères apparents et sans abréviation.

Toute contravention aux dispositions qui précèdent sera punie des peines prévues à l'article 131-13 3° du Code pénal. Les articles 472, 474 (1) et R. 37 du code pénal sont applicables.

NOTA:

(1) Les articles 472 et 474 du code pénal ont été abrogés par l'article 372 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n'ont pas été repris dans le nouveau code pénal.

Article 23

Les coopératives sont tenues de fournir, sur réquisition des contrôleurs ou des agents désignés par les ministres dont elles relèvent suivant leur nature, toutes justifications permettant de vérifier qu'elles fonctionnent conformément à la loi. Elles doivent, notamment, leur communiquer à cet effet leur comptabilité appuyée de toutes pièces justificatives utiles. Toute entrave apportée à l'exercice de ce contrôle est punie des peines prévues aux articles 131-13 3°, R. 35 du Code pénal. Les articles 472, 474 et R. 37 sont applicables.

NOTA:

(1) Les articles 472 et 474 du code pénal ont été abrogés par l'article 372 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, et n'ont pas été repris dans le nouveau code pénal.

Article 24

- Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 27
- Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de supprimer l'appellation : " société coopérative " utilisée de manière illicite ainsi que toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci.

Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu'il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu'il indique, le tout aux frais des dirigeants de l'organisme ayant utilisé les mots ou l'appellation en cause.

Article 25

- Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 17 JORF 14 juillet 1992

I. - Aucune modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut être apportée aux statuts, sauf lorsque la survie de l'entreprise ou les nécessités de son développement l'exigent.

Elle ne peut intervenir qu'après autorisation de l'autorité administrative donnée après avis du Conseil supérieur de la coopération et constatant que les conditions mentionnées au premier alinéa sont remplies. Les réserves qui, à la date de l'autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère pendant une période de dix ans.

Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion et de scission entraînant la dissolution de la coopérative sauf lorsqu'elles interviennent entre des sociétés régies par la présente loi.

II. - Par exception aux dispositions du deuxième alinéa du I :

1° Lorsque la coopérative est régie par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, l'autorisation de procéder aux opérations prévues aux premier et quatrième alinéas du I est donnée par l'organe central auquel l'établissement de crédit coopératif ou mutualiste est affilié, après avis du Conseil supérieur de la coopération.

2° Lorsque la coopérative fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, l'autorisation de modifier les statuts, si elle est nécessaire à la survie de l'entreprise, est accordée par le tribunal saisi de cette procédure.

Article 26

- Modifié par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 16

Sont punis des peines portées aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie :

1° Ceux qui, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, ont fait attribuer à un apport en nature une valeur supérieure à sa valeur réelle ;
2° Les administrateurs ou gérants qui ont sciemment publié ou communiqué des documents comptables inexacts en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
3° Les administrateurs ou gérants qui ont fait de leurs pouvoirs un usage contraire à l'intérêt de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés de manière quelconque et, en particulier, ont disposé dans ces conditions de ses biens ou de son crédit ;
4° Les administrateurs ou gérants qui ont procédé à des répartitions opérées en violation des articles 14, 15, 16, 18 et 19 ci-dessus ou en vertu de dispositions insérées dans les statuts en violation de l'article 25 ;
5° Les administrateurs ou gérants qui, en l'absence d'excédents d'exploitation et hors le cas prévu à l'article 17, ont distribué aux sociétaires les intérêts ou ristournes prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus.

Les premier à sixième alinéas sont applicables aux sociétés coopératives européennes.

Titre III bis : La société coopérative européenne.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 26-1

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- La société coopérative européenne a la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Les articles L. 210-3 du code de commerce et 1837 du code civil sont applicables à la société coopérative européenne selon qu'elle est ou non commerciale. Le siège et l'administration centrale de la société coopérative européenne ne peuvent être dissociés. La société coopérative européenne est régie par le règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), par la présente loi, ainsi que par les dispositions des lois particulières applicables à chaque catégorie de société coopérative, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles de ce règlement.

Chapitre II : La constitution de la société coopérative européenne.

Section 1 : La constitution par voie de fusion.

Article 26-2

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- Toute société coopérative régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés peut participer à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion soit par absorption, soit par création d'une nouvelle personne morale.

Cette constitution est soumise aux dispositions applicables à la catégorie de coopératives à laquelle la société coopérative européenne appartient ou, à défaut, aux dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce, dans la mesure où elles sont compatibles avec le règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité et la présente loi.

Article 26-3

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- Le ou les commissaires à la fusion chargés d'établir le rapport mentionné à l'article 26 du règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité sont désignés par décision de justice. Ils établissent, sous leur responsabilité, un rapport écrit selon les modalités prévues à l'article L. 236-10 du code de commerce. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11 du même code.

Article 26-4

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- I.-Le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération est immatriculée contrôle, conformément aux dispositions applicables à la catégorie de coopératives dont elle relève ou, à défaut, selon les modalités prévues à l'article L. 236-6 du code de commerce, que les opérations préalables à la fusion sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires. A l'issue de ces vérifications, le greffier délivre une attestation de conformité.
- II.-Un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société coopérative européenne issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la légalité de la fusion, pour la partie relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société coopérative européenne.

Il contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VI du livre III de la deuxième partie du code du travail. Le notaire ou le greffier du tribunal contrôle en outre que la constitution de la société coopérative européenne formée par fusion remplit les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables.

Article 26-5

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- La nullité de la fusion ne peut plus être prononcée après l'immatriculation de la société coopérative européenne ou la prise en compte des inscriptions modificatives la concernant au registre du commerce et des sociétés.

Article 26-6

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- Le procureur de la République est compétent pour s'opposer pour des raisons d'intérêt public, conformément au paragraphe 14 de l'article 7 et à l'article 21 du règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, au transfert de siège social d'une société coopérative immatriculée en France, dont il résulterait un changement de droit applicable, ainsi qu'à la participation d'une société coopérative relevant du droit français à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion.

Il se saisit d'office ou est saisi par toute personne ou autorité qui estime une telle opération contraire à un intérêt public.

La décision du procureur de la République est susceptible de recours devant la cour d'appel de Paris.

Section 2 : La constitution par transformation.

Article 26-7

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- En cas de transformation d'une société coopérative en société coopérative européenne, la société établit un projet de transformation.

Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société coopérative est immatriculée et fait l'objet d'une publicité selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport. Le rapport atteste que la société dispose d'actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Les commissaires à la transformation sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11 du code de commerce.

La transformation de la société coopérative en société coopérative européenne est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts de la coopérative qui se transforme.

Elle est également soumise à l'approbation des porteurs de parts à intérêts prioritaires selon les modalités de l'article 11 bis de la présente loi ainsi qu'à celle des titulaires de certificats coopératifs d'investissement et à celle des titulaires de certificats coopératifs d'associés selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article 26-8

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- Lorsque la participation des salariés au sens du paragraphe 7 de l'article 35 du règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité est organisée, le projet de transformation est préalablement approuvé à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

Chapitre III : Le transfert de siège.

Article 26-9

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- Toute société coopérative européenne régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés peut transférer son siège dans un autre Etat membre de la

Communauté européenne. Elle établit un projet de transfert. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont prévues par décret en Conseil d'Etat.

Le transfert est décidé dans les conditions prévues pour la modification des statuts selon les dispositions applicables à la catégorie de coopératives dont relève la société coopérative européenne. Cette décision ne peut pas intervenir avant qu'un délai de deux mois se soit écoulé depuis la publicité du projet. Le transfert est soumis à l'approbation des porteurs de parts à intérêts prioritaires selon les modalités de l'article 11 bis.

Article 26-10

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- En cas d'opposition au transfert de siège, les associés peuvent déclarer leur retrait et obtenir le remboursement de leurs parts selon les modalités prévues par la présente loi.

Article 26-11

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13

Le projet de transfert est présenté à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs d'investissement et à celle des titulaires de certificats coopératifs d'associés. Elles se prononcent sur les modalités de rachat de ces titres.

Lorsque les certificats coopératifs d'investissement et les certificats coopératifs d'associés sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l'offre de rachat présentée par la société est faite selon les modalités prévues par le contrat d'émission et dans les conditions prévues par les articles L. 212-6-3 et L. 212-6-4 du code monétaire et financier.

Lorsque les certificats coopératifs d'investissement et les certificats coopératifs d'associés ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le rachat est effectué selon les modalités prévues par le contrat d'émission. En cas d'opposition des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ou des titulaires de certificats coopératifs d'associés, le rachat des titres est effectué dans des conditions assurant l'égalité entre les titulaires prévues par décret en Conseil d'Etat. La somme revenant aux détenteurs non identifiés ou ne s'étant pas manifestés est consignée.

Article 26-12

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- Le projet de transfert est soumis à l'assemblée des obligataires à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de publicité de l'offre de remboursement ainsi que le délai au terme duquel chaque obligataire qui n'a pas demandé le remboursement conserve sa qualité dans la société aux conditions fixées par le projet de transfert.

Article 26-13

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- Les créanciers non obligataires dont la créance est antérieure au transfert de siège peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société transférant son siège en offre et si elles sont jugées suffisantes. A défaut de remboursement des créances ou de constitution

des garanties ordonnées, le transfert est inopposable à ces créanciers. L'opposition formée n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de transfert. Le présent article ne fait pas obstacle à l'application des conventions autorisant les créanciers non obligataires à exiger le remboursement immédiat de leur créance en cas de transfert de siège.

Article 26-14

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- Un notaire délivre un certificat attestant l'accomplissement des actes et formalités préalables au transfert.

Chapitre IV : La direction et l'administration de la société coopérative européenne.

Article 26-15

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- Les statuts de la société coopérative européenne peuvent prévoir qu'elle est administrée par un conseil d'administration ou par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

Section 1 : Le conseil d'administration et la direction générale.

Article 26-16

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Le nombre de ses membres, fixé par les statuts, est compris entre trois et dix-huit.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir que la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. Dans ce cas, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées générales et au conseil d'administration.

Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Article 26-17

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- Sauf lorsqu'une disposition applicable aux sociétés coopératives de même catégorie l'interdit, une personne morale peut être nommée administrateur.

Article 26-18

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- Chaque administrateur peut se faire communiquer par le directeur général les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Section 2 : Le directoire et le conseil de surveillance.

Article 26-19

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- La société coopérative européenne peut être dirigée par un directoire, agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

Article 26-20

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées générales. Les statuts peuvent prévoir que son président ou le directeur général unique ou tout autre membre désigné à cet effet par le conseil de surveillance et portant le titre de directeur général représente seul la société à l'égard des tiers.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.

Dans les sociétés coopératives européennes dont le capital est inférieur à 150 000 euros,

les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne. Dans ce cas, elle prend le titre de directeur général unique.

Article 26-21

- Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 21

Les membres du directoire ou le directeur général unique sont nommés et révoqués par le conseil de surveillance. Toutefois, si les statuts le prévoient, ils peuvent être nommés par l'assemblée générale selon les modalités prévues par la présente loi et selon les dispositions applicables aux coopératives de même catégorie.

A peine de nullité de la nomination, les membres du directoire sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des associés. Le nombre des membres du directoire est fixé par les statuts, sans pouvoir excéder cinq membres. Toutefois, lorsque la société coopérative européenne entend procéder à une offre au public de ses parts, ce nombre peut être porté à sept.

Article 26-22

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- En cas de vacance au sein du directoire, un membre du conseil de surveillance peut être nommé par ce conseil pour exercer les fonctions de membre du directoire pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Pendant cette durée, les fonctions de l'intéressé au sein du conseil de surveillance sont suspendues.

Article 26-23

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut être supérieur à dix-huit.

Sauf lorsqu'une disposition applicable à la coopérative de même catégorie que la société coopérative européenne l'interdit, une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, la personne morale est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était membre du conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

Article 26-24

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- Chaque membre du conseil de surveillance peut se faire communiquer par le président du directoire les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Section 3 : Règles communes.

Article 26-25

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- Sous réserve de l'article 27 de la présente loi, les statuts doivent prévoir des règles similaires à celles énoncées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 et L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce.

Article 26-26

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- Les administrateurs, le directeur général et les membres du directoire sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des violations des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives ou des dispositions statutaires, soit des fautes commises dans leur gestion.

Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement

responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale.

Section 4 : Acquisition de la qualité d'associé coopérateur.

Article 26-27

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- Les statuts de la société coopérative européenne déterminent les modalités de délivrance de l'agrément des nouveaux associés coopérateurs par le conseil d'administration ou par le directoire, ainsi que les modalités selon lesquelles un recours est exercé devant l'assemblée générale contre les décisions de refus d'agrément.

Section 5 : Les assemblées générales.

Article 26-28

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- Les assemblées générales de la société coopérative européenne sont soumises aux règles prescrites par la présente loi, ainsi qu'à celles applicables aux coopératives de même catégorie dans la mesure où elles sont compatibles avec le règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité.

Section 6 : Le contrôle légal des comptes.

Article 26-29

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- Les comptes annuels des sociétés coopératives européennes sont certifiés par au moins un commissaire aux comptes. Toutefois, les comptes consolidés ou combinés des sociétés coopératives européennes sont certifiés par au moins deux commissaires aux comptes.

Section 7 : La révision.

Article 26-30

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- La société coopérative européenne relevant d'une catégorie particulière de coopératives soumises à une obligation de révision spécifique par un organisme extérieur est soumise à la même obligation.

Chapitre V : L'établissement des comptes.

Article 26-31

- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article L. 524-6-5 du code rural et de la pêche maritime, la société coopérative européenne établit des comptes annuels conformément aux articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce.

Chapitre VI :Dissolution et liquidation de la société coopérative européenne.

Article 26-32

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- Les causes de nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé de la fusion ou les manquements au contrôle de légalité constituent une cause de dissolution de la société coopérative européenne.

Toutefois, lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la dissolution, le tribunal saisi de l'action en dissolution d'une société coopérative européenne créée par fusion accorde un délai pour régulariser la situation. Les actions en dissolution prévues par le présent article se prescrivent par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par la fusion.

Article 26-33

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- Si la société coopérative européenne immatriculée en France n'y a plus son administration centrale, tout intéressé peut demander au tribunal, le cas échéant sous astreinte, la régularisation de cette situation par le transfert du siège social ou le rétablissement de l'administration centrale au lieu du siège social. Le tribunal fixe une durée maximale pour cette régularisation.

Article 26-34

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- A défaut de régularisation à l'issue du délai mentionné à l'article 26-33, le tribunal prononce la dissolution de la société coopérative européenne.

Article 26-35

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- En cas de déplacement vers la France de l'administration centrale d'une société coopérative européenne immatriculée dans un autre Etat membre, en violation de l'article 6 du règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, le procureur de la République informe sans délai l'Etat membre dans lequel est fixé le siège statutaire de cette société.

Article 26-36

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- En cas de déplacement vers un autre Etat membre de la Communauté européenne de l'administration centrale d'une société coopérative européenne immatriculée en France, en violation de l'article 6 du règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, le procureur de la République est compétent pour recevoir cette information des autorités de cet Etat.

Article 26-37

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- Lorsque la dissolution de la société coopérative européenne est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions applicables à la catégorie de coopératives concernée ou conformément à l'article 19 de la présente loi et aux dispositions non contraires de l'article 1844-8 du code civil ou du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce.

Lorsqu'une décision judiciaire prononçant la dissolution d'une société coopérative européenne est devenue définitive, cette décision fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre VII : La transformation de la société coopérative européenne en société coopérative.

Article 26-38

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- Toute société coopérative européenne peut se transformer en société coopérative si, au moment de la transformation, elle est immatriculée depuis plus de deux ans et a fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices.

La société établit un projet de transformation en société coopérative. Ce projet est déposé au greffe du tribunal du siège de la société et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 26-39

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux associés de la société en voie de transformation attestant qu'elle dispose d'actifs nets au moins équivalents à son capital. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11 du code de commerce.

Article 26-40

- Créé par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
- La transformation en société coopérative est décidée par l'assemblée générale extraordinaire selon les modalités prévues pour la modification des statuts spécifiques aux coopératives de même catégorie.

Le projet de transformation est soumis à l'approbation des porteurs de parts à intérêts prioritaires selon les modalités prévues à l'article 11 bis, à l'assemblée des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ainsi qu'à celle des titulaires de certificats coopératifs d'associés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Titre IV : Dispositions diverses.

Article 27

· Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 1 JORF 5 août 2003

Les dispositions des articles L. 225-3 (alinéa 2), L. 225-22 (alinéa 2), L. 225-129 (alinéa 4), L. 225-130, L. 225-131, L. 225-144 (alinéa 1er) et L. 228-39 (alinéa 3) du code de commerce (1) ne sont pas applicables aux sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions. Les dispositions des articles L. 223-19, L. 223-20, L. 225-38, L. 225-39, L. 225-86, L. 225-87, L. 227-10 et L. 227-11 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la société coopérative et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en oeuvre des statuts.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 224-2 du code de commerce (2), le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal prévu audit article.

NOTA:

(1) : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 3 et 4 I 23° :

Références substituées à celles des articles 75 (alinéa 2), 93 (alinéa 2), 180 (alinéa 4), 181, 182, 191 (alinéa 1er) et 285 (alinéa 3) de la loi 66-537 du 24 juillet 1966.

(2) : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 3 et 4 I 23° :

Référence substituée à celle de l'article 71 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966.

Article 27 bis

· Créé par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 19 JORF 14 juillet 1992

Les sociétés coopératives existantes à la date de promulgation de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour porter leur capital au montant minimal fixé à l'article 27.

Les sociétés coopératives dont le capital social serait inférieur à ce montant pourront être dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le tribunal pourra accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne pourra pas prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 28

Les organismes qui se qualifient coopératives et ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi disposent d'un délai d'un an à partir de son entrée en vigueur pour apporter à leur organisation et à leurs statuts les modifications nécessaires ou renoncer à l'usage des mots ou expressions visés à l'article 24.

Pour les sociétés coopératives de commerçants, le délai d'un an prévu ci-dessus me commencera à courir qu'à partir de la date de promulgation de la loi portant statut de la coopération commerciale. En tout état de cause, ce délai expirera le 31 décembre 1949. Les assemblées convoquées en vue de la modification des statuts délibèrent valablement si elles réunissent les conditions requises pour les assemblées ayant pouvoir d'approuver les comptes annuels.

Article 28 bis

· Créé par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 36 JORF 18 juillet 2001

Les associations déclarées relevant du régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou de la loi du 19 avril 1908 applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle peuvent, dans les conditions fixées ci-dessous, se transformer en société coopérative, régie notamment par la présente loi, ayant une activité analogue. Cette transformation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

Les réserves et les fonds associatifs constitués antérieurement à la transformation ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital.

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 16 et de l'article 18 ne leur sont pas applicables.

Les agréments, habilitations et conventions, ainsi que, s'il y a lieu, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit, sous réserve de la conformité de l'objet statutaire de la nouvelle société coopérative et de ses règles d'organisation et de fonctionnement aux conditions législatives et réglementaires requises, d'une part, ainsi que les conventions d'apports associatifs, d'autre part, se poursuivent dans la société coopérative issue de la transformation.

Article 29

La présente loi est applicable aux départements et territoires d'outre-mer.

Article 29 bis

· Créé par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 32 JORF 9 juillet 1996

I. - Sont également applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie les textes modificatifs de la présente loi qui suivent :

- la loi n° 56-745 du 30 juillet 1956 ;
- l'article 26 (1) de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 ;
- l'article premier de la loi n° 85-703 du 12 juillet 1985 ;
- les articles 64-II et 64-III de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 ;
- l'article 32-I de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 ;
- les articles 1er à 19 de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 ;
- les articles 64 et 66 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993.

II. - Au deuxième alinéa de l'article 19 bis, les mots : "des sociétés coopératives, des mutuelles régies par le code de la mutualité, des organismes de mutualité agricole, des sociétés d'assurance à forme mutuelle, des sociétés d'assurance mutuelles et unions de mutuelles régies par le code des assurances, des associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des unions ou fédérations de ces sociétés ou associations" sont remplacés par les mots : "des sociétés coopératives, des sociétés d'assurance mutuelles et unions de mutuelles régies par les dispositions du code des assurances applicables en Nouvelle-Calédonie, y compris les sociétés d'assurances à forme mutuelle à l'exception des organismes de mutualité agricole ou par des associations déclarées

régies par la loi du 1er juillet 1901, des unions ou fédérations de ces sociétés ou associations”.

III. - Au premier alinéa de l'article 27 bis, les mots : “à la date de promulgation de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives disposent d'un délai de cinq ans” sont remplacés par les mots : “à la date de publication de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer disposent d'un délai de deux ans”.

NOTA: L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

” Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. “

pourra prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

(1) Article abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4.

Article 30

Il sera procédé à une codification des textes législatifs intéressant la coopération. La présente loi formera, sous le titre “Des coopératives en général”, le livre Ier de ce code.

Version consolidée résultant des modifications suivantes :

Loi n°83-657 du 20 juillet 1983

Loi n°84-148 du 1 mars 1984

Loi n°85-703 du 12 juillet 1985

Loi n°87-416 du 17 juin 1987

Loi 91-5 1991-01-03 art. 32 JORF 6 janvier 1991

Loi 92-121 1993-01-27 art. 64 JORF 30 janvier 1993

Loi n°92-643 du 13 juillet 1992

Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992

Loi n°93-121 du 27 janvier 1993

Loi n°96-609 du 5 juillet 1996

Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000

Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001

Loi n°2003-706 du 1 août 2003

Loi n°2003-721 du 1 août 2003

LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008

Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009

Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010

LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010

LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010

LOI n°2012-387 du 22 mars 2012

Fuente:

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068032&dateTexte=20130722>

4.19. GUATEMALA

LEY GENERAL DE COOPERATIVAS

DECRETO 82/78

(del 7 de diciembre de 1978)

TITULO I

DE LAS COOPERATIVAS

CAPITULO I

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 1

POLITICA GENERAL.

Se declara de interés nacional la promoción de las organizaciones cooperativas. El Estado impulsará una política de apoyo a las cooperativas y establecerá un régimen de fiscalización y control adecuados. Las entidades estatales, incluyendo las descentralizadas, cuya actividades tengan relación con el movimiento cooperativo, coordinarán sus actividades a dicha política.

Artículo 2

NATURALEZA DE LAS COOPERATIVAS.

Las cooperativas debidamente constituidas, son asociaciones titulares de una empresa económica al servicio de sus asociados, que se rigen en su organización y funcionamiento por las disposiciones de la presente ley. Tendrán personalidad jurídica propia y distinta de la de sus asociados, al estar inscritas en el Registro de Cooperativas.

Artículo 3

NUMERO MINIMO DE ASOCIADOS.

Toda cooperativa deberá estar integrada por lo menos con veinte asociados.

Artículo 4

PRINCIPIOS.

Las cooperativas para tener la consideración de tales, deberán cumplir los principios siguientes:

- a) Procurar el mejoramiento social y económico de sus miembros mediante el esfuerzo común;
- b) No perseguir fines de lucro, sino de servicios a sus asociados;
- c) Ser de duración indefinida y de capital variable, formado por aportaciones nominativas de igual valor, transferibles sólo entre los asociados;

- d) Funcionar conforme a los principios de libre adhesión, retiro voluntario, interés limitado al capital, neutralidad política y religiosa e igualdad de derechos y obligaciones de todos sus miembros;
- e) Conceder a cada asociado un solo voto, cualquiera que sea el número de aportaciones que posea. El ejercicio del voto podrá ser delegado, cuando así lo establezcan los Estatutos;
- f) Distribuir los excedentes y las pérdidas, en proporción a la participación de cada asociado en las actividades de la cooperativa;
- g) Establecer un fondo de reserva irrepartible entre los asociados; y
- h) Fomentar la educación e integración cooperativa y el establecimiento de servicios sociales.

Artículo 5

TIPOS DE COOPERATIVAS.

Las cooperativas podrán desarrollar cualquier actividad lícita comprendida en los sectores de la producción, el consumo y los servicios, compatible con los principios y el espíritu cooperativista. Serán cooperativas especializadas las que se ocupen de una sola actividad económica, social o cultural, tales como agrícolas, pecuarias, artesanales, de comercialización, de consumo, de ahorro y crédito, de transportes, de vivienda, de seguros de educación. Serán cooperativas integrales o de servicios varios, las que se ocupen de varias de las actividades económicas, sociales o culturales, con el objeto de satisfacer necesidades conexas y complementarias de los asociados.

Artículo 6

DENOMINACION.

Las cooperativas incluirán en su denominación la palabra "cooperativa", el tipo que les corresponda y la mención de su actividad principal. Esto no constituye limitación para el desarrollo de las actividades que requiera su crecimiento y las necesidades comunes de sus miembros.

Artículo 7

RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Toda cooperativa es de responsabilidad limitada, de consiguiente por las obligaciones que contraiga responde únicamente al patrimonio de la cooperativa.

Artículo 8

MIEMBROS DE LAS COOPERATIVAS.

Para ser asociado de una cooperativa se requiere:

- a) Tener capacidad legal, salvo los casos de cooperativas con asociados menores de edad y las formadas por éstos, en las cuales los menores se considerarán capaces para ejecutar los actos internos de la cooperativa. En sus relaciones con terceros, las últimas deberán estar representadas por personas civilmente capaces; y b) Reunir los requisitos exigidos en los estatutos y cumplir con éstos, con la ley y sus reglamentos.

Artículo 9

PERDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO.

La calidad de asociado a una cooperativa se pierde por renuncia o expulsión por alguna de las causales que expresamente establezcan los Estatutos. El retiro no extingue las obligaciones que el asociado haya contraído para con la cooperativa y le da derecho al reembolso de sus aportaciones, depósitos, intereses y excedentes aún no pagados que le correspondiere deduciéndole el valor de las obligaciones pendientes a la fecha del retiro.

Artículo 10

ESTATUTOS

Las reglas de funcionamiento de toda cooperativa constituirán sus Estatutos, los cuales deben contener por lo menos:

- a) La forma en que se administra y fiscaliza internamente la cooperativa, sus órganos, atribuciones y período de sus integrantes.
- b) Manera en que se ejercerá la representación legal;
- c) Requisitos de las convocatorias a Asambleas Generales y mayoría requerida para la validez de sus resoluciones;
- d) Plazo de reunión de la Asamblea General anual para elegir a los miembros de los órganos de la cooperativa, conocer y aprobar los estados financieros y los informes de los órganos obligados a presentarlos. La Asamblea Anual podrá conocer otros asuntos que ameriten ser conocidos por ella;
- e) Reglas para la disolución y liquidación de la cooperativa. Los sobrantes, si los hubiere, solamente pueden usarse para la promoción del movimiento cooperativo y en consecuencia, se entregarán a la federación a que pertenezca la cooperativa en cuestión, y en su defecto, a la confederación;
- f) Los requisitos necesarios para la reforma de los Estatutos. En todo caso será necesario el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en una asamblea General expresamente convocada para conocer de la reforma a los Estatutos. Acordada la reforma ésta deberá inscribirse en el Registro de Cooperativas;
- g) Las demás disposiciones que se consideren convenientes para el buen funcionamiento de la cooperativa, siempre que no se opongan a la presente ley y a sus reglamentos.

Artículo 11

ESTATUTOS UNIFORMES.

El Instituto Nacional de Cooperativas formulará estatutos uniformes para cada uno de los tipos de cooperativa, los cuales podrán ser adoptados por las cooperativas que se constituyan o modifiquen para el caso. Cuando se adopten estatutos uniformes, en el acto correspondiente bastará hacer mención a tal circunstancia, sin que sea necesario incluir su texto.

Artículo 12

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

Las cooperativas tendrán como órganos sociales: La Asamblea General, el Consejo de Administración y la Comisión de Vigilancia. Podrán tener otros cuerpos de gestión y control. En el reglamento de la presente ley se incluirán los lineamientos generales del régimen administrativo económico. Los miembros de los órganos directivos son solidariamente responsables de sus decisiones. la responsabilidad solidaria alcanza a los miembros de la Comisión de Vigilancia cuando no hubieren objetado actos oportunamente. Quedan eximidos de responsabilidad los miembros que razonen su voto en el acto de tomar la decisión respectiva.

Artículo 13

DISOLUCION.

Las cooperativas se disolverán por cualquiera de las causales siguientes:

- a) Por la disminución del número de asociados a menos de veinte;
- b) Por hacerse imposible el cumplimiento de los fines para los cuales se constituyeron;
- c) Por voluntad de los dos tercios de los asociados reunidos en Asamblea General convocada especialmente para el efecto;
- d) Por la pérdida de más del sesenta por ciento (60%) del capital social, siempre que esta situación sea irreparable; y
- e) Por fusión o incorporación a otra cooperativa.

Artículo 14

LIQUIDACION.

Al darse una de las causales de disolución, la cooperativa entrará en liquidación, para lo cual se integrará una comisión liquidadora. El orden de pagos será el siguiente:

- a) Acreedurías de terceros;
- b) Gastos de liquidación;
- c) Reintegro a los asociados del valor de sus aportaciones o de la parte proporcional que en caso de insuficiencia les correspondiere; y
- d) El saldo final, si lo hubiere, se entregará a la federación o en su defecto, a la confederación.

CAPITULO II

INTEGRACION COOPERATIVA

Artículo 15

FEDERACIONES

Las Federaciones con Cooperativas de segundo grado formadas por cooperativas de primer grado, que se dediquen a actividades semejantes. No podrá haber más de una federación de la misma naturaleza.

Artículo 16

CONFEDERACION

La confederación es una cooperativa de tercer grado, integrada por las federaciones y tendrá carácter representativo del movimiento cooperativo nacional.

Artículo 17

RÉGIMEN APLICABLE

Las federaciones y confederación serán consideradas como asociaciones cooperativas, por lo tanto, son válidas para ellas las disposiciones de constitución que le sean aplicables, así como los derechos y obligaciones contenidos en el régimen de protección señalados en la presente ley.

Artículo 18

CENTRALES DE SERVICIO

Las federaciones podrán formar centrales de servicio, con el objeto de desarrollar proyectos económicos y prestación de servicios, con aportaciones de sus integrantes. Para su constitución será suficiente la fórmula contractual.

CAPITULO III

CONSTITUCION E INSCRIPCION DE COOPERATIVAS

Artículo 19

ACTO DE CONSTITUCION.

La Cooperativa podrá constituirse por escritura pública o bien por acta constitutiva de la misma autorizada por el alcalde la jurisdicción, y contendrá además de los requisitos generales de dichos instrumentos, lo siguiente:

- a) El tipo de cooperativa de que se trate;
- b) La denominación de la cooperativa;
- c) El objeto social;
- d) El domicilio;
- e) El valor de las aportaciones, su forma de pago y de reintegro.
- f) La forma de constituir las reservas;
- g) La forma y reglas de distribución de los resultados obtenidos durante el ejercicio social respectivo;
- h) El porcentaje que se destine a la reserva irrepatriable, el cual no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de los excedentes;
- i) La forma de transmitir las aportaciones entre los asociados;
- j) Forma en que se otorga la representación legal de la cooperativa;
- k) Fijación del ejercicio social, el cual deberá ser anual;
- l) Reglas para la disolución o liquidación de la cooperativa; y
- m) Los estatutos de la cooperativa o indicación de si se adoptan estatutos uniformes aprobados por el INACOP.

Artículo 20

INSCRIPCION.

El testimonio de la escritura o certificación del acta constitutiva, se presentará con duplicado al Registro de Cooperativas dentro del mes siguiente al acto de constitución. El registrador comprobará si se han llenado los requisitos legales y en caso afirmativo, procederá a la inscripción de la cooperativa, razonará el documento que se le presente indicando las razones del rechazo.

Artículo 21

CONTENIDO DE LA INSCRIPCION.

La inscripción constitutiva comprenderá, en forma resumida, lo relativo a los incisos a) al l) del artículo 19 y hará mención de si se adoptaron estatutos uniformes o bien si la cooperativa tiene estatutos particulares.

Artículo 22

EFFECTOS DE LA INSCRIPCION

Hecha la inscripción, se devolverá debidamente razonado el documento que le sirvió de base. La cooperativa adquiere su personalidad jurídica desde el momento de su

inscripción en el Registro de Cooperativas, sin necesidad de ningún otro acto. Las modificaciones al acto constitutivo se inscribirán en la misma forma.

CAPITULO IV DE LA PROTECCION ESTATAL

Artículo 23 INCENTIVOS FISCALES Y AYUDAS ESPECIALES

Las cooperativas gozan de la protección del Estado, que proporcionará la ayuda técnica y financiera necesarias y especialmente las siguientes:

- a) Exención total del impuesto del papel sellado y timbres fiscales;
- b) Exención del impuesto sobre compra-venta, permuta y adjudicación de inmuebles, herencias, legados y donaciones, cuando sean destinados a los fines de las cooperativas;
- c) Exoneración de impuestos, derechos, tasas y sobrecargos en las importaciones de maquinaria, vehículos de trabajo, herramientas, instrumentos, insumos, equipo y material educativo, sementales y enseres de trabajo agrícola, ganadero, industrial o artesanal, siempre que no se manufacturen en el país o en el área centro-americana. Esta exoneración será aplicada en cada caso por el Ministerio de Economía, previo dictamen favorable del INACOP, comunicada al Ministerio de Finanzas para los efectos aduanales;
- y
- d) Las oficinas, empresas y funcionarios del Estado, de las Municipales e instituciones autónomas o descentralizadas tramitarán con la mayor celeridad todo asunto o gestión pertinente a las cooperativas, prestándole apoyo y auxilios.

Artículo 24 SANCIONES POR MAL USO DE LAS EXONERACIONES.

Los objetos a que se refiere el inciso c) del artículo anterior, sólo pueden ser adquiridos y utilizados por las cooperativas, federaciones y confederación para sus propios fines. En caso de contravención a lo dispuesto, los infractores serán obligados al pago de los impuestos y a las sanciones que determina el artículo 30 de la presente ley. Los bienes muebles adquiridos de acuerdo al inciso c) del artículo anterior, no podrán ser negociados antes de los cuatro años de ser adquiridos, salvo que por el desarrollo de la cooperativa se haga necesaria una negociación, podrá efectuarse previa calificación y autorización del organismo rector.

Artículo 25 ASISTENCIA FINANCIERA.

El Estado establecerá una política financiera de apoyo al movimiento cooperativo, a tal efecto situará en el Banco de Guatemala los fondos necesarios para financiar parcial o totalmente los programas que se estimen de mayor prioridad. Dichos fondos serán canalizados a través del sistema bancario nacional.

CAPITULO V DE LA FISCALIZACION

Artículo 26

FISCALIZACION

Las cooperativas, federaciones y confederaciones estarán sujetas a la fiscalización del Estado, el cual la ejercerá a través de la Inspección General de Cooperativas adscrita al Instituto Nacional de Cooperativas.

Artículo 27

RÉGIMEN DE LA FISCALIZACION.

Para que la Inspección General de Cooperativas pueda cumplir a cabalidad su función, las entidades cooperativas están obligadas a:

- a) Adoptar las normas contables que establezca la Inspección General de Cooperativas;
- b) Llevar los libros de actas y registros contables autorizados por la Inspección General de Cooperativas;
- c) Enviar las nóminas de las personas electas para los distintos órganos de la cooperativa, dentro de los diez (10) días de la elección; y
- d) Remitir a la Inspección, dentro de los treinta (30) días de celebrada la Asamblea Ordinaria Anual, la memoria de labores y los estados financieros del ejercicio.

CAPITULO VI

DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES

Artículo 28

PROHIBICION DE USAR LA DENOMINACION.

Las entidades que no se ajusten a las disposiciones de la presente Ley, no pueden adoptar la denominación "COOPERATIVA" u otra análoga, ni utilizarla en su denominación social.

Artículo 29

PROHIBICIONES

Se prohíbe a las cooperativas:

- a) Intervenir en actos de carácter político;
- b) Pertenecer a entidades de carácter religiosos;
- c) Establecer ventajas o privilegios en favor de determinados asociados;
- d) Remunerar con comisión o en otra forma a quien aporte nuevos asociados;
- e) Especular con títulos en operaciones de bolsa;
- f) Establecer con comerciantes o sociedades lucrativas, combinaciones o acuerdos que hagan participar a éstos directa o indirectamente de los beneficios y franquicias que otorga la ley; y
- g) Imponer condiciones para el ingreso de nuevos asociados que impidan su crecimiento constante, armónico y ordenado.

Artículo 30

SANCIONES

Las cooperativas de primero, segundo y tercer grados que contravengan las disposiciones de esta ley serán sancionadas de acuerdo a la gravedad de la infracción, por el INACOP en la forma siguiente:

- a) Con multa de Q.25.00 a Q.1,000.00;
- b) Suspensión, restricción o revocación de los derechos que esta ley confiere en su régimen de protección; y
- c) Cancelación de la personalidad jurídica.

TITULO II

DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 31

CREACION

Con carácter de entidad estatal descentralizada y autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, se crea el INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS, cuya denominación abreviada será INACOP. Tendrá duración indefinida y su domicilio será el que determine el Organismo Ejecutivo en el reglamento de la presente ley.

Artículo 32

OBJETIVOS.

El INACOP tendrá como objetivos:

- a) Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos relacionados con las cooperativas y en especial la presente ley y sus reglamentos;
- b) Promover la organización de cooperativas de los distintos tipos, conforme a las necesidades de los grupos que lo soliciten o promuevan; y
- c) Proporcionar asistencia técnica y administrativa a los grupos pre-cooperativos y a las cooperativas.

Artículo 33

ATRIBUCIONES DEL INACOP.

Para el cumplimiento de sus objetivos, el INACOP tendrá las atribuciones siguientes:

- a) Divulgar los principios y técnicas cooperativas;
- b) Proporcionar orientación y asistencia técnica y administrativa a los grupos que tengan el propósito de organizarse en cooperativa y a las cooperativas en funcionamiento;
- c) Llevar el registro de las cooperativas; y
- d) Impulsar leyes y reglamentos para el mejor desenvolvimiento del cooperativismo y servir de organismo consultivo en dicha materia.

Artículo 34

DISCRECIONALIDAD FUNCIONAL.

El Gobierno de la República garantiza al INACOP la discrecionalidad funcional necesaria para el cumplimiento de sus objetivos, especialmente en lo relacionado con:

- a) Su organización interna en todo aquello que no establece específicamente esta ley; y
- b) La administración de su personal incluyendo selección, nombramiento y remoción, de acuerdo con el reglamento específico emitido por el Consejo Directivo.

CAPITULO II ORGANIZACION

Artículo 35 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

EL INACOP tendrá en su estructura administrativa como órganos superiores:

- a) El Consejo Directivo; y
- b) El Gerente.

Contará además con las unidades administrativas y técnicas necesarias para su buen funcionamiento. El Consejo Directivo, a propuesta del Gerente establecerá dichas unidades y reglamentará sus funciones.

CAPITULO III CONSEJO DIRECTIVO

Artículo 36 INTEGRACION.

El Consejo Directivo del INACOP se integra con:

- a) Tres miembros designados por el Presidente de la República, de los cuales uno será presidente; y
- b) Dos miembros designados, uno por las cooperativas federadas y otro por las cooperativas independientes.

Los miembros del Consejo Directivo durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser designados para un período más.

Artículo 37 REQUISITOS PARA SER MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO.

Para ser miembro del Consejo Directivo se requiere:

- a) Ser ciudadano guatemalteco en el ejercicio de sus derechos;
- b) Ser mayor de 25 años y tener experiencia en materia cooperativa;
- c) No desempeñar cargo alguno en la dirección de partidos políticos;
- d) No ser pariente de alguno de los miembros del Consejo Directivo dentro de los grados de ley; y
- e) No ser ministro de ningún culto religioso.

Artículo 38 REUNIONES Y DIETAS.

El Consejo Directivo se reunirá en sesión, previa convocatoria hecha por el Presidente o por quien lo substituya. Sesionará por lo menos dos veces al mes en forma regular y tantas veces como sea necesario, en forma extraordinaria.

Los miembros del Consejo Directivo devengarán dietas por sesión celebrada a la que asistan, en ningún caso más de una vez en un día ni más de cuatro veces al mes.

Artículo 39 SUPLENTES

El Consejo Directivo de INACOP se integrará con un suplente por cada uno de los miembros propietarios, designado en la misma forma que éstos. Los suplentes deberán reunir los mismo requisitos que se requieren para ser propietario y lo substituirá en caso de ausencia o falta temporal. Si vacare el cargo de propietario respectivo, el suplente terminará el período.

Artículo 40

QUORUM Y RESOLUCIONES

Cuatro miembros titulares, o los substitutos en su caso, constituye quórum para toda sesión, el cual deberá ser presidida por el Presidente o, en su caso, por el Vicepresidente. Sus resoluciones deben tomarse por mayoría de votos de los miembros presentes; en caso de empate tendrá doble voto quien la presida. No son permitidas las abstenciones. El Secretario levantará acta de cada sesión, firmándola conjuntamente con el Presidente.

Artículo 41

ATRIBUCIONES.

Corresponde al Consejo Directivo aprobar los lineamientos generales del Instituto y velar por el cumplimiento de sus fines y para el efecto tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Planificar, dirigir, coordinar los programas de acuerdo a sus objetivos y velar por el cumplimiento de los mismos;
- b) Gestionar las fuentes de recursos necesarios para sus ingresos presupuestales;
- c) Aprobar el presupuesto anual;
- d) Aprobar la memoria anual de labores y los estados financieros;
- e) Emitir y reformar los reglamentos internos del INACOP;
- f) Nombrar y remover al Gerente y aprobar los nombramientos de los jefes de departamento;
- g) Nombrar y remover al Auditor Interno;
- h) Autorizar los cambios en la organización administrativa, a propuesta del Gerente;
- i) Aprobar los programas de capacitación de personal y asistencia técnica;
- j) Decidir sobre la asignación de becas para el personal del Instituto y miembros del movimiento cooperativo; y
- k) Ejercer las demás funciones y facultades que le corresponden de acuerdo con esta ley, sus reglamentos y otras disposiciones aplicables.

Artículo 42

RESPONSABILIDAD

Los miembros del Consejo Directivo ejercen sus funciones bajo su responsabilidad personal y, sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, son solidariamente responsables por los daños y perjuicios que se causen por los actos u omisiones ilegales en que incurran. De esta responsabilidad quedan exentos los que hayan hecho constar su voto disidente en el acta en que se tomó el acuerdo en cuestión.

CAPITULO IV

ADMINISTRACION

Artículo 43
GERENTE

La administración del INACOP estará a cargo de un Gerente. Al Gerente le corresponde la ejecución de las resoluciones y disposiciones tomadas por el Consejo Directivo.

Artículo 44
CALIDADES.

Para ser nombrado Gerente se requieren las mismas calidades que para ser miembro del Consejo Directivo.

Artículo 45
ATRIBUCIONES.

El Gerente, además de las consignadas en esta ley, tiene las atribuciones siguientes:

- a) Velar por el buen funcionamiento del INACOP y por la realización de sus fines de conformidad con la presente ley, sus reglamentos y las decisiones de la Junta Directiva;
- b) Ejercitar la representación legal del INACOP;
- c) Otorgar mandatos especiales con la autorización previa del Consejo Directivo;
- d) Actuar como Secretario del Consejo Directivo, asistiendo a sus reuniones con voz pero sin voto;
- e) Proponer al Consejo Directivo los nombramientos de los jefes de departamentos y nombrar y remover al personal de INACOP, de conformidad con los reglamentos internos;
- f) Proponer al Consejo Directivo los proyectos de organización administrativa;
- g) Someter a la aprobación del Consejo Directivo el proyecto de presupuesto anual, la memoria de labores, los programas de largo y mediano plazo, el plan operativo anual y cualquier otro proyecto tendiente a la realización de los fines del INACOP; y
- h) Las demás atribuciones inherente a su cargo.

CAPITULO V
REGISTRO DE COOPERATIVAS**Artículo 46**
ORGANIZACION.

El Registro de Cooperativas formará parte del INACOP, el cual organizará y reglamentará.

Artículo 47
FUNCIONES

El Registro de Cooperativas tendrá a su cargo la inscripción de los actos constitutivos de las cooperativas, federaciones y confederación, las modificaciones a dichos actos; los acuerdos de disolución, así como todos los actos que se refieran a dichas entidades. Podrá expedir sin necesidad de citación alguna, las certificaciones que le sean solicitadas sobre actos que en él consten.

Artículo 48
REGISTRADOR

El Registro de Cooperativas estará a cargo de un Registrador nombrado por el Consejo Directivo y el cual deberá reunir los mismos requisitos que establece el artículo 37.

CAPITULO VI

RÉGIMEN FINANCIERO

Artículo 49

PATRIMONIO.

Para el cumplimiento de sus objetivos y la realización de sus funciones, el Instituto contará con:

- a) Una asignación ordinaria anual incluida en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación.
- b) Los bienes que le sean transferidos por el Estado o sus Instituciones descentralizadas, autónomas o semiautónomas;
- c) Las aportaciones extraordinarias que el Estado acuerde otorgarle;
- d) Las asignaciones, subvenciones, donaciones, herencias o legados que le otorguen las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; y
- e) Los demás bienes que adquiera por cualquier título.

Artículo 50

IMPUESTOS Y TASAS.

El Instituto gozará de los siguientes beneficios:

- a) Exención de toda clase de impuestos, contribuciones, tasas y arbitrios municipales sobre sus bienes inmuebles, rentas o ingresos de cualquier naturaleza y sobre los actos jurídicos que celebre en cuanto deban ser pagados por el Instituto;
- b) Exención de impuestos sobre los bienes que importe para su organización, instalación y funcionamiento; y
- c) Franquicia postal, telegráfica y radiográfica para su comunicación interna y con las cooperativas.

Artículo 51

ORGANOS DE CONTROL Y FISCALIZACION.

La inspección, fiscalización y control de las operaciones contables y financieras del INACOP, estarán a cargo de la Auditoria Interna del mismo y de la Contraloría de Cuentas en lo que sea de su competencia.

Artículo 52

DEL AUDITOR INTERNO

El Auditor Interno es el Jefe de la Auditoria y será nombrado por el Consejo Directivo, ante el cual es responsable. Puede ser removido por el mismo, sin expresión de causa, para lo cual se requiere el voto favorable de por lo menos cuatro de los miembros que lo integran. El Auditor Interno debe poseer el título universitario correspondiente y ser colegiado activo, ser además de treinta años y ciudadano en el ejercicio de sus derechos. Está sujeto a los mismos impedimentos establecidos para el Gerente y además, no puede ser pariente de éste.

TITULO III

DE LA FISCALIZACION DE LAS COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACION

CAPITULO UNICO DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS

Artículo 53 ORGANO FISCALIZADOR.

La fiscalización y vigilancia permanente de las cooperativas, federaciones y confederación de cooperativas, estará a cargo de la Inspección General de Cooperativas, la cual funcionará adscrita al INACOP pero con independencia funcional, administrativa y económica.

Artículo 54 INSPECTOR GENERAL DE COOPERATIVAS.

El Jefe de la Inspectoría General de Cooperativas será el Inspector General, el cual será nombrado por el Presidente de la República y deberá ser graduado universitario, colegiado activo y no tener parentesco legal con los miembros del Consejo Directivo ni con el Gerente del INACOP. En igual forma se nombrará al Sub-Inspector General.

Artículo 55 ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION GENERAL.

La Inspección General de Cooperativas tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables a las asociaciones cooperativas y demás instituciones sujetas a su control.
- b) Comunicar al Gerente las irregularidades o infracciones que notare en las operaciones y actividades de las asociaciones cooperativas y demás instituciones sujetas a su control; en caso el Gerente no dictare las medidas que a juicio del Inspector General de Cooperativas fueren adecuadas para subsanar las faltas, en un plazo de ocho días, exponer la situación al Consejo Directivo por medio de su Presidente;
- c) En caso d que el Consejo Directivo no adoptare las medidas adecuadas para subsanar las irregularidades o infracciones que se le hubieren comunicado, o acordare resoluciones o reglamentaciones que contravengan los preceptos legales, o consintiere hechos que afecten el prestigio del movimiento cooperativo, procederá a aplicar las sanciones correspondientes;
- d) Revisar regularmente las operaciones de las asociaciones cooperativas, efectuando inspecciones, arqueos y otras verificaciones convenientes, las cuales deberán realizar por lo menos una vez al año y sin previo aviso;
- e) Hacer a las asociaciones bajo su control las sugerencias o recomendaciones que estimare convenientes; impartir las instrucciones necesarias para subsanar las deficiencias o irregularidades que se encontraren; y adoptar las medidas que estimare convenientes para sancionar y corregir las infracciones que se hubieren cometido;
- f) Presentar informes sobre los actos de fiscalización de las asociaciones bajo su control, al Presidente de la República, así como cualquier otra información confidencial sobre el cumplimiento de sus funciones que le fuere solicitada por dicho funcionario;
- g) Colaborar con el Instituto Nacional de Cooperativas y con las asociaciones cooperativas en el cumplimiento de sus fines;
- h) Nombrar, remover y promover al personal de la institución a su cargo;

- i) Preparar el proyecto de presupuesto anual de la institución y someterlo a la aprobación del Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Finanzas, velando por su correcta aplicación;
- j) Aprobar la liquidación final de las asociaciones cooperativas que fueren canceladas y liquidadas;
- k) Ejercer las demás funciones y atribuciones que le correspondan para el mejor cumplimiento de su cometido, de acuerdo con las leyes, reglamentos y otras disposiciones aplicables; y
- l) Elaborar el reglamento de la Inspección General y someterlo a la aprobación del Ejecutivo.

Artículo 56

COSTO DE FISCALIZACION

Las instituciones sujetas a control de la Inspección General de Cooperativas costearán parcialmente los servicios de fiscalización, pagando a ésta una cuota anual que fijará el Inspector General de Cooperativas. Dicha cuota será calculada en relación a utilidades netas, según su estado de resultados de cierre del ejercicio anterior. El Gobierno de la República contribuirá con la diferencia entre la suma de las cuotas percibidas, fijada de conformidad con el párrafo anterior, y el monto del presupuesto de la Inspección General de Cooperativas.

Artículo 57

ORGANIZACION DE LA INSPECCION.

El Inspector General de Cooperativas organizará y reglamentará los departamentos y secciones de la Inspección.

Artículo 58

REMOCION

El Inspector General y el Sub-Inspector general podrán ser removidos de sus cargos por el Presidente de la república.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS

Artículo 59

INTEGRACION DEL PRIMER CONSEJO DIRECTIVO.

El Organismo Ejecutivo deberá nombrar a sus representantes en el Consejo Directivo y convocar a las entidades cooperativas para que nombren a los suyos en un plazo no mayor de treinta (30) días, a partir de la vigencia de la presente ley.

Artículo 60

DESIGNACION DEL INSPECTOR Y SUB-INSPECTOR GENERALES DE COOPERATIVAS.

El Inspector y el Sub-Inspector General de Cooperativas deberán estar nombrados dentro del mes siguiente a la publicación de esta ley.

Artículo 61

RECURSOS FINANCIEROS.

Los recursos financieros que el sector público destina a los departamentos o secciones de cooperativas, con excepción de la Superintendencia de Bancos, pasarán a formar parte del presupuesto del INACOP. El Ministerio de Finanzas Públicas hará las transferencias o ampliaciones presupuestales necesarias para cumplir con lo anterior, así como para dotar el presupuesto ante al INACOP como a la Inspección General de Cooperativas.

Artículo 62 REGLAMENTOS

Los reglamentos de la presente ley deberán estar aprobados dentro de los tres meses siguientes a la publicación de este Decreto.

Artículo 63 RÉGIMEN DE PROTECCION INDUSTRIAL.

El Estado otorgará a las cooperativas los beneficios del régimen de incentivos fiscales al desarrollo industrial cuando lo soliciten, en igualdad de condiciones que las empresas que clasifiquen conforme a la legislación vigente.

Artículo 64 DEROGATORIAS.

Los Decretos 643, 1014, 1295 y 1653 del Congreso de la República y el Decreto Presidencia 560 quedan derogados a partir de la fecha en que empiece a funcionar el INACOP.

Artículo 65 VIGENCIA.

El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días después de su publicación en el Diario Oficial.

4.20. HAITI

1 Loi sur les Coopératives d'épargne et de crédit

« Le Moniteur » 10 juillet 2002

Vu les articles 1, 111-1, 144, 245, 246 de la Constitution,
Vu la loi du 17 août 1979 créant la Banque de la République d'Haïti;
Vu le décret du 31 mars 1981 créant un organisme autonome dénommé Conseil National des Coopératives (CNC);
Vu le décret du 2 avril 1981 réglementant l'organisation des coopératives et les différentes formes d'association, ayant la société coopérative pour base;
Vu le décret du 27 mars 1985 modifiant les articles 9 et 17 de la Loi du 17 août 1979 créant la Banque de la République d'Haïti,
Vu le décret du 17 mai 1995 sur la libéralisation des taux d'intérêt ;

Considérant que les coopératives d'épargne et de crédit communément appelées caisses opulaires participent au développement économique et social du pays, Considérant qu'il y a lieu de renforcer le contrôle des activités des coopératives d'épargne et de crédit en vue

de veiller à la sécurité des intérêts des déposants de ce secteur, Considérant qu'il faut donner à la BRH et au CNC un instrument juridique leur permettant d'encadrer, de superviser et de contrôler les coopératives d'épargne et de crédit, Sur le rapport des Ministres de la Planification et de la Coopération Externe, de l'Economie et des Finances et après délibération en Conseil des Ministres;

Le pouvoir Exécutif a proposé. Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:

TITRE I

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

CHAPITRE 1

OBJET DE LA LOI

Article 1 La présente loi porte sur la constitution, l'organisation, le contrôle et la surveillance des Coopératives d'Épargne et de Crédit (CEC), communément appelées Caisses Populaires et des fédérations de coopératives d'épargne et de crédit.

Article 2 Une coopérative est une entreprise ayant des objectifs, une structure et des organes administratifs qui la différencient de la société.
En plus de son objet fondamental, la CEC se doit de:

- a) favoriser la coopération entre les sociétaires, entre les sociétaires et la CEC, et entre celle-ci et d'autres organismes coopératifs;
- b) promouvoir l'éducation économique, sociale et coopérative.

Article 3 Une CEC est une coopérative financière dont l'objet est l'intermédiation financière. Cette intermédiation financière consiste dans la réception des fonds de ses sociétaires et de leur faire du crédit. Son existence légale vient du Conseil National des Coopératives (CNC) et de la Banque de la République d'Haïti (BRH).
Elle peut provisoirement faire des opérations aux conditions du marché avec des usagers qui doivent changer de statut au cours d'une période allant de trois (3) à six (6) mois.

Article 4 Les activités d'une CEC étant essentiellement coopératives, celles-ci sont, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, réservées à ses sociétaires. Ces activités sont réputées ne pas constituer l'exploitation d'un commerce ou d'un moyen de profit.

Article 5 En tant que coopératives, les CEC sont fondées sur les principes coopératifs suivants:

- 1) Adhésion volontaire et ouverte à Tous,
- 2) Pouvoir démocratique exercé par les membres: un membre, une voix,
- 3) Participation économique des membres, Autonomie et Indépendance de la Coopérative,
- 4) Éducation, Formation Information des Sociétaires et du grand public,
- 5) Coopération entre les coopératives, Engagement envers la communauté.

CHAPITRE II

DÉFINITIONS PARTICULIERES, GENERALES ET SIGLES

Article 6 Aux fins de la présente loi on entend par:

A) DÉFINITIONS PARTICULIÈRES

1. Coopératives : Toute association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux, culturels communs, au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement.
2. Sociétaires : Tout membre fondateur ou associé d'une coopérative d'épargne et de crédit détenteur au moins d'une part sociale et d'un carnet de sociétaire qui tient lieu de titre nominatif.

B) DÉFINITIONS GÉNÉRALES

Intermédiation financière : Rôle que jouent certains agents économiques appelés coopératives pour arriver sur un marché donné à une adaptation des services et produits financiers

Usagers : personnes physiques ou morales qui utilisent aux conditions du marché, les services d'une coopérative financière sans avoir la qualité de membres. Au terme d'une période probatoire de trois (3) à (6) mois, l'utilisateur doit décider d'adhérer ou pas.

La coopérative ne peut continuer à rendre des services à cette personne que si elle remplit des conditions pour devenir membre à part entière.

Fonds : sont considérés, comme tels, sommes d'argent, fonds reçus des sociétaires et des usagers, les fonds qu'une coopérative recueille notamment sous forme de dépôt d'épargne, dépôt à terme et de placements avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge par elle de les restituer. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds des sociétaires et des usagers.

Fonds propres : Ils sont constitués des parts sociales et des réserves.

Opération de crédit : Tout acte par lequel une coopérative financière agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre institution ou d'un sociétaire, prend dans l'intérêt de celui-ci un engagement par signature, tel qu'un aval, un cautionnement ou une garantie.

Succursales : point de service ou comptoir d'une coopérative sans personnalité juridique propre mais doté d'une certaine autonomie de gestion.

Motif raisonnable de croire que : lorsque l'agent a des informations suffisantes qui lui permettent de présumer de l'existence d'une faute de gestion ou d'une infraction.

2. SIGLE

BRH : Banque de la République d'Haïti

CNC : Conseil National des Coopératives

CEC : Coopérative d'Epargne et de Crédit

FCP : Fédération des Caisses Populaires

DIGCP : Direction de l'Inspection Générale des Caisses Populaires

TITRE II

DES ORGANES DE RÉGLEMENTATIONS, DE SUPERVISION ET DE CONTROLE DES CEC

CHAPITRE I

RÔLE DE LA BRH, DU CNC ET DE LA FCP

Article 7

La BRH est chargée à travers la DIGCP de contrôler le respect par les CEC, et les fédérations de CEC, des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables et de sanctionner les manquements constatés.

Article 8 Le CNC est l'autorité de tutelle des coopératives. Il est chargé de formuler et promouvoir la politique du gouvernement en matière coopérative.

Article 9 Une fédération est un regroupement de CEC qui a pour objets, en plus de ceux prévus pour une coopérative, de :

- a) protéger les intérêts des CEC qui lui sont affiliées, favoriser la réalisation de leurs objets et promouvoir leur développement;
- b) agir, dans la mesure prévue par la présente loi, comme organisme de surveillance et de contrôle des CEC qui lui sont affiliées;
- c) fournir aux CEC qui lui sont affiliées des services d'éducation, de promotion, de consultation, d'assistance technique et autres services semblables selon un plan d'orientation préparé en accord avec le CNC et la BRH, chacun en ce qui le concerne
- d) représenter les CEC directement, ou par un organe créé auprès d'elles, auprès des instances et à des forums dans le but de promouvoir leur intégration au système financier national.

CHAPITRE II

DU CONTROLE ET DE LA SUPERVISION DES CEC

Section 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 10 Il est créé au sein de la Banque de la République d'Haïti (BRH) une direction dénommée "Direction de l'Inspection Générale des Caisses Populaires" (DIGCP). Cette direction est chargée de superviser, de contrôler les CEC et des fédérations de coopérative d'épargne et de crédit régulièrement constituées aux termes de la présente loi. Elle veille aussi au respect des normes et de la législation les concernant.

Article 11 La DIGCP est placée sous l'autorité d'un fonctionnaire ayant le rang de directeur. Elle peut contenir plusieurs services. La BRH met à sa disposition des moyens financiers, matériels et humains pour l'exercice de sa mission. La DIGCP examine les conditions d'exploitation et veille à la qualité de la situation financière des CEC.

Article 12 La BRH communique par voie d'instructions aux CEC et aux fédérations les dispositions réglementaires auxquelles elles sont astreintes.

Article 13 La BRH a le pouvoir de vérifier soit par elle-même, soit par un vérificateur indépendant qu'il mandate à cet effet, les comptes et activités de toute entité dont opérations activités s'apparenteraient à celles d'une CEC.

Article 14 La BRH réglemente les opérations et les activités des CEC notamment en matière de dépôt, de crédit et de placement. Elle peut déterminer :

- 1. l'objet et les limites dans lesquelles, en pourcentage des fonds propres, le crédit peut être consenti ou le placement réalisé,
- 2. le délai maximum des échéances,
- 3. dans le cas des opérations de crédit, les type et montant des sûretés requises,

4. les plafonds individuels ou collectifs des différentes catégories d'opérations de crédit ou de placement ainsi que les monnaies en cours,
5. les règlements de la BRH peuvent être différents de ceux édictés pour les institutions financières directement réglementées par la BRH. La BRH peut, notamment, tenir compte de l'étendue de leur réseau, de leur localisation, de la qualité de leur management, de leur niveau de capitalisation pour faire des exigences particulières à des CEC

Article 15 La BRH peut astreindre les CEC au respect des règles de gestion visant à assurer sécurité des dépôts qui leur sont confiés et à promouvoir une politique de crédit conforme à l'intérêt national.

La BRH peut notamment instituer des règles de liquidité visant à contraindre les CEC à conserver sous une forme immédiatement disponible ou aisément mobilisable une partie de leur ressource à court terme. Elle peut les astreindre à des règles de division de risques et de limites de concentration du crédit.

La BRH peut également édicter des règles visant à s'assurer que le montant des ressources propres des CEC est en rapport avec le volume des fonds qui leur sont confiés ou des risques qu'elles assument.

CHAPITRE III

DE L'AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT DES CEC

Article 16 Toutes les CEC sont enregistrées au CNC, en tant que coopératives. Toute demande d'enregistrement doit être accompagnée des pièces et documents suivants :

- 1) une lettre de demande d'enregistrement à l'adresse du Directeur Général du CNC
- 2) l'original et deux copies de l'Acte Constitutif
- 3) l'original et deux copies des Règlements internes
- 4) l'original et deux copies du Bilan d'Ouverture
- 5) l'original et deux copies des statuts
- 6) le procès-verbal de l'Assemblée Générale Constitutive
- 7) l'original et deux copies du Compte d'Exploitation Prévisionnel
- 8) la copie de la carte d'identité des administrateurs

Article 17 Avant d'exercer leur activité, toutes les CEC doivent être autorisées à fonctionner. Cette autorisation est constatée par un avis d'autorisation de fonctionnement délivré par le CNC après avis de la BRH.

Article 18 L'avis d'autorisation de fonctionnement est accordé dans les soixante (60) jours à compter de la réception de la demande, à moins que des documents ou renseignements supplémentaires ne soient requis. Le cas échéant, le CNC communique au demandeur la liste exhaustive des documents ou renseignements manquants. Tout refus d'autorisation de fonctionnement est motivé et notifié au demandeur.

Article 19 Toute demande d'autorisation de fonctionnement produite par une CEC doit être accompagnée des pièces et documents suivants:

- 1) l'enregistrement du CNC en tant que coopérative,
- 2) une expédition de l'acte constitutif de la coopérative dûment enregistré au droit légal à la Direction Générale des Impôts du lieu où siège la coopérative,
- 3) une copie des statuts dûment signés par un minimum de 21 membres fondateurs,
- 4) une copie des règlements internes

- 5) le bilan d'ouverture et ou le dernier bilan de la CEC
- 6) le plan d'affaires ou compte prévisionnel s'il s'agit d'une CEC en formation,
- 7) la preuve de la constitution d'un capital social minimum de cinquante mille gourdes (G 50,000.00). Au moment de sa formation, la CEC doit verser le quart (1/4) du capital social, soit douze mille cinq cents (G 12,500.00) auprès d'une banque de la place. Ce montant pourra être libéré au moment de l'obtention de l'autorisation de fonctionnement qui doit être publiée dans un journal à grand tirage aux frais et aux soins de la CEC quinze jours après sa réception.
- Si la demande est supportée par une fédération la preuve de la constitution d'un capital social minimum sera de vingt cinq mille gourdes (G 25,000.00). Au moment de sa formation la CEC doit verser le quart (1/4) du capital soit six mille deux cent cinquante gourdes (6,250.00).
- Dans les deux cas la libération du reste du capital se fait dans un délai de deux (2) ans, à raison de la moitié (50%) chaque année, à compter de la publication dans un journal à grand tirage de l'avis d'autorisation de fonctionnement.
- 8) un certificat d'acceptation obligatoire de la supervision et du contrôle de la part de toutes les CEC dont la demande est appuyée par une fédération.
- 9) tous autres informations et documents susceptibles d'éclairer la décision de la BRH.
- Les montants indiqués aux alinéas 7 du présent article peuvent être modifiés par la BRH de concert avec le CNC suivant l'évolution du secteur et de l'activité économique général.

Article 20 Les statuts de la CEC, sa référence d'enregistrement et son autorisation de fonctionnement sont transmis pour publication au Journal Officiel Le Moniteur à la diligence du CNC. Le CNC fait tenir à la BRH une copie de la lettre de transmission aux Presses Nationales.

Article 21 L'autorisation de fonctionnement, délivrée en vertu de la présente loi, est affichée à une place visible, accessible au public, tant au local de la CEC que dans ses points de services ou comptoirs.

Article 22 Le retrait de l'autorisation de fonctionnement peut être prononcé par le CNC, soit à la demande de la BRH, soit à la demande de la CEC, soit d'office lorsque la CEC ne remplit plus les conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée, lorsqu'elle n'a pas fait usage de son autorisation dans un délai de douze (12) mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité.

La BRH et le CNC peuvent réclamer d'une CEC n'ayant pas débuté ses opérations six (6) mois après avoir reçu son autorisation de fonctionnement, une réévaluation de son dossier.

Cette réévaluation peut aboutir au retrait de l'autorisation.

Toute CEC dont l'autorisation a été révoquée entre en liquidation. Pendant le délai de liquidation, la CEC demeure soumise au contrôle exclusif de la BRH. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité de CEC qu'en précisant qu'elle est en liquidation.

SECTION 1.-DÉNOMINATION

Article 23 Aucune personne autre qu'une CEC ne peut se présenter sous la dénomination de "CAISSE POPULAIRE", "COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT", ou toutes autres appellations similaires.

Aucune personne autre qu'une CEC régie par la présente loi, ne peut inclure dans son nom l'une ou l'autre de ces expressions ou une combinaison de celles-ci, ni les utiliser pour ses activités.

Une CEC ne peut, dans le cours de ses opérations, s'identifier sous un autre nom que celui indiqué dans ses statuts. Elle ne peut se servir d'un nom ou d'un sigle déjà utilisé par d'autres entités.

Article 24 Il est interdit à toute personne autre qu'une CEC autorisée à fonctionner, d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou d'une façon générale des expressions faisant croire qu'elle est dûment autorisée à fonctionner en tant que CEC, ou de créer une confusion en cette matière.

Il est interdit à une CEC de s'adonner directement, dans le cadre de la présente loi, aux activités de commerce ou de production de biens et de services. Toutefois, elle peut prendre part dans le capital social de toute société jusqu'à concurrence de 25%. Cette participation sera puisée au chapitre des trop-perçus et des parts permanentes.

SECTION 2. - ACTE CONSTITUTIF

Article 25 L'acte constitutif d'une CEC doit comporter les points suivants:

- a) la dénomination, le sigle, le siège et la zone géographique d'intervention de la CEC,
- b) les opérations auxquelles la CEC compte se livrer,
- c) la désignation précise des fondateurs,
- d) la manière dont le capital social est constitué,
- e) la durée de la CEC,
- f) les noms des membres du conseil d'administration et du comité de surveillance, et de ceux qui sont autorisés à signer pour la CEC,
- g) les pouvoirs des administrateurs et la durée de leur mandat,
- h) les droits et obligations des sociétaires.

Article 26 La création de la CEC doit être constatée par acte authentique rédigé par un notaire du lieu du siège social de la CEC ou par acte sous seing privé déposé chez un notaire du même lieu. Pour le dépôt des pièces, les honoraires du notaire ne peuvent pas dépasser 5/100 du capital social minimum.

SECTION 3. – SIEGE SOCIAL

Article 27 Le siège social d'une CEC constitue son domicile. Il doit être situé dans le département représentant la zone d'intervention géographique indiquée dans ses statuts.

Article 28 Une CEC peut, dans les limites du département indiqué dans ses statuts, changer l'adresse de son siège social par décision du conseil d'administration, après avis préalable de la BRH et au CNC, quinze (15) jours au moins avant l'exécution de cette décision. La publication de cet avis se fait dans le même délai dans un quotidien à grand tirage et par tout autre moyen (radio, télévision, etc.).

Article 29 La CEC peut transférer son siège ou développer des succursales dans n'importe qu'elle autre commune dudit département après autorisation préalable du CNC délivrée après avis de la BRH. La demande de changement d'adresse de son siège social doit accompagner toute modification des statuts visant à le transférer.

Article 30 Toute CEC doit solliciter l'autorisation de la BRH et du CNC pour implanter des succursales.

Cette autorisation est donnée par le CNC après avis de la BRH qui doit statuer sur la performance financière de la CEC et sur l'opportunité du projet. Toute réponse défavorable doit être motivée.

SECTION 4. - FONDS PROPRES

Article 31 Les fonds propres d'une CEC se composent du capital social et des réserves.

Article 32 Le capital social d'une CEC est variable. Il est composé de parts sociales de qualification. Il peut également comprendre des parts permanentes.

Article 33 Les parts sociales de qualification sont nominatives, indivisibles, incessibles à des tiers et souscrites par chacun des sociétaires. La valeur nominale de ces parts est fixée dans les statuts, elle ne peut excéder cinq cents gourdes (G 500.00).

Les parts doivent être libérées à la souscription pour un montant minimum de 50% et le solde dans un délai de six (6) mois à compter de la souscription. Le remboursement des parts ne peut en aucun cas excéder leur valeur nominale.

Les parts ne peuvent recevoir de dividende mais seulement un intérêt fixé chaque année par l'assemblée générale des sociétaires.

Article 34 Lorsque ses statuts l'y autorisent, une CEC peut émettre des parts permanentes non assorties de droit de vote.

La BRH peut avoir un droit de regard sur l'émission de ces parts. La BRH détermine, par voie réglementaire les limites des parts permanentes dans la composition du capital social.

Article 35 L'assemblée générale des sociétaires doit prévoir, dans les limites prévues par la BRH, le nombre de parts permanentes que la CEC est autorisée à émettre, le montant de l'émission, la valeur nominale de chaque part, les privilèges, les droits et les restrictions de ces parts, ainsi que les conditions particulières de leur remboursement et de leur transfert.

Les parts permanentes sont entièrement libérées, comportent une échéance minimale de dix (10) ans, sont productifs d'intérêt et peuvent faire l'objet d'un crédit d'impôt après deux (2) années de détention.

SECTION 5. - QUALITE DES MEMBRES

Article 36 Une CEC peut être composée deux catégories de membres. Il s'agit :

1. des sociétaires que constitue toute personne physique qui:

- a) a son domicile, une résidence, un établissement ou un travail habituel dans la zone géographique d'intervention de la CEC
- b) fait une demande écrite d'admission,
- c) souscrit et paye une part sociale,
- d) s'engage à respecter les statuts et les règlements internes de la CEC
- e) est admise par le conseil d'administration.

2. des membres auxiliaires que représentent les personnes morales et les personnes mineures situées dans l'aire de leurs activités. Le membre auxiliaire ne peut détenir que des parts permanentes prévues par les articles 34 et 35 de la présente loi. Il peut assister aux assemblées, toutefois, il n'a pas droit de vote et n'est éligible à aucune fonction au sein de la CEC.

Article 37 A moins que les statuts n'en décident autrement, les sociétaires ne sont financièrement responsables des engagements de la CEC que jusqu'à concurrence du montant de leurs parts souscrites.

Le remboursement des parts sociales à un sociétaire ou à des héritiers, en cas de décès, ne pourra jamais excéder la valeur nominale de ces parts augmentées des intérêts et des ristournes qui lui reviennent.

Article 38 Sauf cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, nul sociétaire ne peut se retirer de la CEC avant le délai d'une (1) année prenant date à partir de son inscription comme sociétaire.

Article 39 Les droits de chaque sociétaire sont représentés par un titre nominatif qui porte la dénomination de la CEC, les nom, prénom, qualité et domicile du titulaire, la date de son admission, le nombre de parts souscrites, le tout signé par ceux qui ont la gestion et la signature sociale, le carnet de sociétaire tient lieu de titre nominatif au sociétaire d'une CEC.

La part sociale confère le droit de propriété, le droit d'assister aux assemblées, de voter et de devenir administrateur.

La part sociale rapporte des intérêts, ne peut avoir de plus value et n'est pas négociable sur les marchés. La part sociale est rachetable uniquement par les membres de la CEC et remboursable à sa valeur nominale.

SECTION 6. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 40 L'assemblée générale est l'autorité suprême de la CEC. Ses décisions engagent tous les sociétaires pourvu qu'elles soient conformes à la présente loi et aux statuts.

Article 41 L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an, sur convocation du Président du conseil d'administration, dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l'exercice.

Elle peut être convoquée à l'extraordinaire, à tout moment, par le président du conseil d'administration, par deux (2) membres du conseil d'administration, par le comité de surveillance ou sur la demande motivée de 25% de ses sociétaires.

Article 42 Pour pouvoir délibérer valablement l'assemblée générale doit réunir les deux tiers (2/3) des membres. Lorsque le quorum prévu par la loi n'est pas atteint, l'assemblée sera convoquée à nouveau. Si le quorum n'est pas atteint après cette convocation faite à huitaine, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de sociétaires présents.

Dans les assemblées générales ordinaires comme dans les assemblées générales extraordinaires, les décisions sont prises à la majorité des sociétaires présents.

Les délibérations des assemblées généralement ordinaires ou extraordinaires sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire du conseil d'administration, et les membres du comité de surveillance.

Article 43 L'assemblée générale annuelle d'une CEC a compétence pour:

- a) prendre connaissance du rapport annuel,
- b) statuer sur la répartition des trop-perçus annuels,
- c) élire et révoquer les membres du conseil d'administration et du comité de surveillance et de crédit,

- d) nommer un vérificateur,
- e) modifier les statuts et les règlements internes,
- f) déterminer l'intérêt payable sur les parts permanentes, le cas échéant
- g) traiter de toutes autres questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la CEC.

SECTION 7. – DIRIGEANTS

Article 44 Sont les dirigeants de la CEC, les membres du conseil d'administration, du comité de surveillance et du comité de crédit ainsi que toute autre personne nommée par le conseil d'administration de la CEC à titre de directeur.

Article 45 Les dirigeants d'une coopérative sont présumés en être les mandataires.

Article 46 Un dirigeant d'une CEC doit, dans l'exercice de ses fonctions, agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.

Il doit agir avec soin, prudence et diligence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable. Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans l'intérêt de la CEC et respecter ses objets. A cette fin, il doit tenir compte de l'intérêt des sociétaires et éviter de se placer dans une situation de conflits entre son intérêt personnel et ses obligations.

Article 47 Aucune action ne sera recevable contre le dirigeant démissionnaire ou exclu, ou contre ses héritiers, tant de la part de la CEC que de la part des créanciers de celle-ci, après qu'il se sera écoulé trois (3) années depuis la démission ou l'exclusion.

Article 48 Peut être dirigeant, toute personne physique qui est membre de la CEC, à l'exception:

- a) d'un employé de la CEC,
- b) d'un employé de la fédération à laquelle la CEC est affiliée
- c) d'un dirigeant ou d'un employé d'une autre CEC, ou de tout établissement concurrent
- d) ayant totalement ou partiellement le même objet social,
- e) d'un failli non réhabilité,
- f) d'une personne qui a fait l'objet d'une condamnation:
 - 1) pour crime;
 - 2) pour vol, escroquerie ou abus de confiance,
 - 3) pour contrefaçon ou falsification de billets de banque, de sceau, timbres, poinçons et marques,
 - 4) pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsions de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'Etat, faux en écriture et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque,
 - 5) pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions,
 - 6) pour émission de chèque sans provision ;
- g) d'une personne qui a formellement reconnu avoir perpétré les faits cités à l'alinéa précédent,
- h) d'une personne qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passé en force de chose jugée, pour les faits cités à l'alinéa (d) ou des faits analogues,
- i) d'une personne qui occupait la fonction de dirigeant lors de la cessation de paiement d'une CEC.

Article 49 Pour être membre du conseil d'administration, du comité de surveillance ou du comité de crédit d'une CEC, il faut habiter dans les limites de l'aire d'activité de la CEC.

Les membres des différents conseils ne doivent avoir entre eux aucun lien de parenté ou d'alliance jusqu'au troisième degré. De plus, le cumul des postes est interdit.

Les fonctions de membres du conseil d'administration, du comité de surveillance et du comité de crédit s'exercent à titre gratuit. Seuls les frais raisonnables engagés par les membres de ces conseils dans l'exercice de leurs fonctions peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par l'assemblée générale des sociétaires. En dehors de tels remboursements, il ne peut leur être accordé aucun avantage direct ou indirect, sous quelque forme que ce soit.

SECTION 8. - CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 50 Le conseil d'administration administre les affaires de la CEC et exerce, dans les limites des statuts et des règlements internes, les pouvoirs qui lui sont généralement ou spécialement délégués par l'assemblée générale des sociétaires.

A cet effet, il doit notamment:

- a) définir la Politique de gestion des ressources de la CEC
- b) définir la politique de crédit de la CEC,
- c) assurer le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires
- d) favoriser le travail des personnes chargées de l'inspection et de la vérification de la CEC et de toute mission de contrôle dépêchée par la BRH ou par la fédération, selon le cas,
- d) encourager par toute mesure utile l'éducation économique, sociale et coopérative des sociétaires,
- e) mettre en application les décisions de l'assemblée générale,
- f) rendre compte de son mandat et présenter le rapport annuel lors de l'assemblée générale.

Article 51 Le conseil d'administration est élu par l'assemblée générale et est composé d'au moins cinq (5) membres et de neuf (9) membres au plus, dont un président, un vice-président et un secrétaire.

Article 52 Le conseil d'administration se réunit au siège social aussi souvent que l'intérêt de la CEC l'exige sur la convocation du président ou encore toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.

Pour délibérer valablement, le conseil doit réunir au moins la moitié des membres et les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial.

Article 53 Le Président du conseil d'administration représente la CEC en justice en demandant qu'en défendant. Le conseil d'administration peut nommer un Comité de Direction tiré de son sein et déléguer une partie de ses pouvoirs à un Directeur.

SECTION 9. - COMITE DE SURVEILLANCE ET DE CRÉDIT

Toute CEC a un comité de surveillance composé de trois (3) membres.

Article 55 Le comité de surveillance a pour fonction de surveiller les opérations de la CEC.

Il doit s'assurer notamment que:

- a) la vérification de l'encaisse et des autres éléments de l'actif est faite,,

- b) les opérations de la CEC sont conformes à la présente loi et aux règlements qui lui sont applicables en vertu de la présente loi,
- c) les affaires internes et les activités de la CEC sont inspectées conformément aux dispositions de la présente loi,
- d) la CEC se soumet aux normes et aux instructions prises en vertu de la présente loi,
- e) les règles adoptées par la CEC sont respectées.

Article 56 Le comité de surveillance a en outre pour fonction de recevoir les plaintes des sociétaires, d'en saisir au besoin les autres organes de la CEC et de répondre au plaignant.

Article 57 Toute CEC a un comité de crédit composé de trois (3) personnes. Le comité de crédit a pour responsabilité de gérer le crédit conformément aux politiques et procédures définies en matière de crédit et adoptées par le conseil d'administration. Le comité de crédit est tenu de faire rapport de ses activités à l'assemblée générale annuelle.

SECTION 10. - AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS

Article 58 Il est accordé aux CEC et à leur fédération les avantages suivants

- a) Plafonnement de l'impôt sur le revenu à 10%
- b) Exonération de l'impôt sur la Contribution Foncière des Propriétés Bâties pour les locaux abritant les opérations d'une CEC ou d'une Fédération de CEC
- c) Exonération de la patente.

CHAPITRE V

FONCTIONNEMENT

SECTION 1.- GARANTIES

Article 59 Une CEC ne peut hypothéquer ou autrement donner en garantie un bien qu'elle détient, sauf pour garantir un emprunt quelle effectue pour les besoins de liquidités à court terme.

La CEC doit, avant de donner de telles garanties, obtenir l'autorisation de la fédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l'est pas, de la BRH.

SECTION 2.- Fonds de Soutien Aux Coopératives

Article 60 Il est fait obligation à toute CEC de concourir à la constitution d'un fonds dénommé « Fonds de Soutien aux Coopératives ». Ce fonds qui est géré dans un compte spécial ouvert à la BRH vise à appuyer toute CEC en difficulté ou faisant face à des besoins de financement.

Article 61 La BRH est chargée de la gestion du Fonds de Soutien aux Coopératives. Elle est autorisée à collecter les contributions annuelles qui sont établies pour toute CEC à 10% des troppercus.

Elle détermine les conditions d'utilisation de ce fonds en termes de décaissement et de remboursement.

Article 62 Seules les CEC affiliées peuvent, dans le cadre de la présente loi, recourir à l'utilisation de ce fonds pour soutenir leur croissance ou financer tout projet en soumettant à leur fédération leur dossier de projet. La fédération est chargée de transmettre dans les conditions arrêtées toute requête émanant des CEC dûment approuvée par elle.

La BRH répond valablement à toute requête émanant des fédérations de CEC toutes les fois qu'elle le juge nécessaire et selon les disponibilités. Elle peut décider d'intervenir directement pour injecter des fonds dans une fédération au bénéfice de ses membres.

SECTION 3.- FONDS DE RÉSERVES

Article 63 Il est fait annuellement un prélèvement de 10% des trop-perçus de toute CEC aux FINS de constituer un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand le fonds de réserve atteint un montant qui correspond au double de celui du capital social.

Le fonds de réserve est insaisissable et incessible et en aucun cas ne peut être partagé entre les sociétaires. Toute utilisation de ce fonds est subordonnée à une décision de l'assemblée générale après avis de la FCP affiliée ou de la BRH. L'accord des deux-tiers (2/3) des membres présents est requis en la circonstance.

SECTION 4.- FONDS À DES FINS SOCIALES

Article 64 Toutes les fois que ses fonds propres sont supérieurs ou égaux aux fonds propres réglementaires, une CEC peut, par règlement, établir un fonds devant servir à des fins sociales ou communautaires. Il ne peut affecter à ce fonds plus de 10% du montant attribué en ristournes.

Les sommes affectées au fonds doivent être utilisées par le conseil d'administration dans les trois (3) ans de leur affectation. À défaut de quoi, elles sont versées dans le fonds de réserve.

SECTION 5.- TROP-PERÇUS OU EXCÉDENTS

Article 65 L'affectation des trop-perçus annuels des CEC est déterminée par l'Assemblée générale sous réserve des dispositions de la présente loi. Elle doit aussi tenir compte des normes ou exigences faites par la BRH en matière de fonds propres.

Article 66 Les trop-perçus annuels sont affectés, après les prélèvements légaux, en priorité, selon les dispositions de l'article 67 de la présente loi. Le solde est distribué aux sociétaires au prorata des affaires traitées par chacun d'eux avec la CEC et non au prorata du nombre de parts sociales détenues par chaque sociétaire.

Article 67 Les ristournes peuvent varier selon la nature des opérations effectuées avec la CEC.

SECTION 6. - PRATIQUES DE GESTION SAINES

Article 68 Un dirigeant et un employé dont la fonction lui permet de consentir du crédit sont soumis aux mêmes règles de déontologie, contenues dans les règlements internes de la CEC ou émises par la BRH. En cas de conflit entre les règles émises par la BRH et les règlements internes, la règle la plus rigoureuse s'applique.

Article 69 Un dirigeant qui a un intérêt dans une entreprise mettant en conflit son intérêt et celui de la CEC doit, sous peine de destitution de ses fonctions, dénoncer son intérêt, s'abstenir de voter sur toute question concernant l'entreprise dans laquelle il a un intérêt et éviter d'influencer la décision s'y rapportant.

Il doit en outre se retirer de la réunion pour la durée des délibérations qui concernent l'entreprise dans laquelle il a un intérêt. Mention de la déclaration d'intérêts du dirigeant doit être faite au procès-verbal de la réunion.

Article 70 Une CEC ne peut consentir du crédit à ses employés ou à une personne liée à l'un de ses dirigeants ou employés, à des conditions plus avantageuses que celles qu'elle consent dans le cours normal de ses opérations.

Article 71 Une CEC ne peut consentir du crédit à l'un de ses dirigeants ou à une personne qui lui est liée que dans la mesure déterminée par les règles de déontologie et conformément aux normes de crédit qui lui sont applicables.

Article 72 Est une personne liée à un dirigeant ou à un employé d'une CEC

- 1) son conjoint, son enfant mineur, ou l'enfant mineur de son conjoint,
- 2) la personne à laquelle il est associé ou la société de personne dans laquelle il est un associé
- 3) une personne morale qui est contrôlée par lui ou par son conjoint, individuellement ou ensemble
- 4) une personne morale dans laquelle il détient 5% du capital.

Article 73 Aucun immeuble appartenant à une CEC ne peut être vendu, sauf en cas de dissolution de la CEC, sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale de la CEC et la l'accord final de la FCP affiliée ou de la BRH en cas de non affiliation. Le cas échéant, cet accord doit intervenir dans un délai maximum de trente (30) jours.

SECTION 7. - DONS, LEGS ET LIBÉRALITÉS

Article 74 Les CEC sont habilitées au terme de la présente loi, à recevoir des dons, legs et libéralités de toute nature émanant de toute personne morale ou physique.

Article 75 Les dons, legs et libéralités reçus par les CEC entrent dans leur patrimoine social.

TITRE III

DIVULGATION FINANCIÈRE, TENUE DES LIVRES

REGISTRES, SURVEILLANCE ET DU CONTROLE DES CEC

CHAPITRE I

DIVULGATION FINANCIÈRE

Article 76 Sauf disposition contraire de ses règlements, l'exercice financier d'une CEC se termine le 30 septembre de chaque année.

Article 77 A la fin de l'exercice financier, la CEC prépare un rapport annuel qui contient

- 1) le nom et l'adresse du siège social de la CEC
- 2) les noms et occupation des dirigeants de la CEC
- 3) le nombre de sociétaires de la CEC
- 4) l'état de l'actif et du passif, l'état des résultats, l'état des trop-perçus, l'état de la réserve légale et un état des provisions pour couvrir les pertes sur le crédit consenti et les placements effectués, chacun présenté sur la base comparative avec l'état correspondant de l'exercice financiers précédant celui qui vient de se terminer
- 5) le rapport du vérificateur.

Tout sociétaire a le droit de recevoir sans frais, sur demande, une copie du rapport annuel.

Article 78 Sans préjudice des dispositions de la présente loi sur la surveillance et le contrôle, la CEC doit, dans les six (6) mois qui suivent la fin de son exercice financier, préparer et transmettre à la BRH et le cas échéant, à la fédération à laquelle elle est affiliée, un état annuel exposant sa situation financière.

Les états financiers dûment vérifiés, indiquant les résultats de ses opérations pour l'exercice financier, sont accompagnés d'un exposé sur sa situation financière. Cet état est signé par le président et le secrétaire du conseil d'administration.

CHAPITRE II

TENUE DES LIVRES ET REGISTRES

Article 79 Toute CEC tient à son siège un registre contenant notamment :

- 1) ses statuts, ses règlements et tout avis concernant l'adresse de son siège social
- 2) les procès-verbaux et les résolutions de ses assemblées générales
- 3) les procès-verbaux des réunions et les résolutions du conseil d'administration et du comité de surveillance
- 4) une liste mentionnant les noms et occupation des dirigeants de la CEC avec mention du début de la fin de chaque mandat ou de la durée des fonctions, selon le cas
- 5) une liste mentionnant les noms et dernière adresse connue des sociétaires de la CEC et des autres titulaires de parts
- 6) les détails de la souscription des chaque part ainsi que les dates de leur souscription, de leur remboursement ou de leur transfert ;
- 7) une liste des frais exigé par la CEC pour les différents services qu'elle offre
- 8) les livres, registres et autres écritures comptables nécessaires à la préparation des états financiers
- 9) des états de compte indiquant chaque jour, pour chaque déposant, les opérations qu'il effectue avec la CEC, ainsi que son solde créditeur ou débiteur.
- 10) les pièces justificatives et documents supportant l'ensemble des transactions effectuées pour son propre compte et celui des sociétaires.

Article 80 Les livres, registres et autres écritures comptables d'une CEC peuvent être tenus sur tout support d'information permettant d'avoir accès à des données écrites et compréhensibles en langage courant.

Article 81 Un sociétaire peut consulter dans les registres de la CEC, pendant les heures normales d'ouverture des bureaux, les document visés aux paragraphes 1 2.4.5 et 7 de l'article 79.

Il peut en outre obtenir des copies des documents visés aux paragraphes 1, 2, 4, et 7 de cet article. La CEC peut exiger le paiement des frais de reproduction et de transmission de ces documents.

CHAPITRE III

SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DES CEC

Article 82 La BRH peut astreindre les CEC et les fédérations au respect des règles de gestion et de prudence visant à assurer la sécurité des dépôts qui leur sont confiés.

Article 83 Toute CEC ou fédération est tenue de fournir à la BRH, quand elle est requise, tous les renseignements, livres et documents qu'elle juge nécessaire pour lui permettre de connaître avec exactitude la position de l'institution inspectée.

Article 84 Tout dirigeant ou toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'une CEC ou qui est employé par celle-ci est tenu au secret professionnel sous peine de tomber sous le coup de l'article 323 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé à la BRH, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Article 85 Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des livres., registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de celui qui effectue l'inspection ou les examens et recherches, lui en donner communication et lui en faciliter l'examen.

Article 86 Il est interdit d'entraver le travail d'une personne qui effectue une inspection, une vérification ou des examens et recherche, notamment en l'induisant en erreur.

Article 87 La BRH ou son représentant peut, dans l'exercice de ses fonctions et si elle a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi ou à toute loi dont elle est chargée de surveiller l'application a été commise, saisir tout document relatif à cette infraction, pourvu qu'elle en laisse copie à la personne entre les mains de laquelle elle saisit ce document. La BRH assure la garde du document saisi.

Article 88 La CEC et la FCP doivent une comptabilité selon les méthodes définies et arrêtées par la BRH en accord avec le CNC. Elles sont tenues de produire des états financiers et des justifications nécessaires prouvant qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la présente loi et à toute réquisition de la BRH.

S'il résulte au terme d'une inspection qu'il y a eu une violation de la présente loi ou qu'un préjudice quelconque et a été causé aux intérêts de la CEC, la fédération, et le cas échéant, la BRH en avisera le conseil d'administration et le comité de surveillance en vue d'adopter les mesures appropriées.

Article 89 Si la BRH constate dans l'administration et la gestion d'une CEC ou d'une fédération des contraventions à la présente loi, aux règlements en vigueur, ou des pratiques préjudiciables aux intérêts des déposants et autres créanciers, elle peut exiger que la CEC ou la FCP concernée adopte un plan de redressement.

Le plan de redressement est soumis à l'approbation de la BRH dans le délai qu'elle aura fixé. Celle-ci peut l'approuver avec ou sans modification.

Article 90 Lorsqu'une CEC ou une FCP n'obtempère pas à l'ordonnance de la BRH, celle-ci peut établir le plan de redressement qu'elle juge approprié.

Article 91 Une CEC ou une FCP qui est tenue d'appliquer un plan de redressement doit fournir à la BRH tout rapport qu'elle peut exiger relativement à l'application du plan, selon la fréquence, la forme et la teneur qu'elle détermine.

Article 92 Une CEC ou une FCP ne peut plus solliciter ou recevoir de dépôt tant qu'elle est défaut:

- 1) d'adopter un plan de redressement;
- 2) d'appliquer un plan de redressement;
- 3) de fournir à la BRH tout rapport qu'elle exige relativement à l'application d'un plan de redressement.

Article 93 En cas de récidive, la BRH pourra dessaisir la CEC ou la fédération en attendant sa mise en liquidation.

CHAPITRE V

VERIFICATION ET CONCOURS EXCEPTIONNELS

SECTION 1.-VÉRIFICATION

Article 94 Toute CEC non affiliée doit chaque année faire vérifier ses livres et comptes par un vérificateur indépendant. Les CEC affiliés sont vérifiés par la fédération.

Article 95 A défaut par une CEC non affiliée de faire vérifier ses livres et compte ou de nommer un vérificateur indépendant conformément à la présente loi, la BRH peut nommer un vérificateur dont la rémunération est à la charge de la coopérative.

Article 96 Le vérificateur d'une CEC doit être membre d'une association professionnelle de comptables reconnue par la loi.

Il ne peut être dirigeant, une personne à laquelle un dirigeant est lié, un employé ou un membre de la CEC dont il est chargé de faire la vérification ni, le cas échéant, de la fédération à laquelle cette CEC est affiliée. Le vérificateur peut toutefois être employé de la fédération à ce titre.

Article 97 Le vérificateur a accès à tous les livres, registres, comptes et autres écritures comptables de la CEC ainsi qu'aux pièces justificatives. Toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l'examen.

Article 98 Le vérificateur peut exiger la tenue d'une réunion du conseil d'administration et d'y être entendu sur toute question relative à son mandat. Il peut exiger des dirigeants, des mandataires et des employés de la CEC, les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de son mandat. Le vérificateur remet son rapport au conseil d'administration de la CEC.

Article 99 Le vérificateur doit indiquer dans son rapport

- 1) s'il a effectué son travail conformément aux normes de vérification généralement reconnues
- 2) si, à son avis, les états financiers de la CEC compris dans le rapport soumis à l'assemblée annuelle, présentent fidèlement sa situation financière et les résultats de ses opérations, conformément aux principes comptables généralement reconnus;
- 3) tout autre renseignement déterminé par règlement de la BRH.

Le vérificateur doit également fournir dans son rapport des explications suffisantes en ce qui a trait à toute restriction que comporte son opinion. Il doit transmettre copie de son rapport à la BRH.

Le vérificateur qui de bonne foi fait un rapport conformément à cet article n'encourt aucune responsabilité civile de ce fait.

Article 100 Le vérificateur a droit d'assister à toute assemblée générale et d'y être entendu sur toute question relative à son mandat.

Article 101 Tout dirigeant qui prend connaissance d'une erreur ou d'un renseignement inexact dans les états financiers ayant fait l'objet d'un rapport du vérificateur doit

immédiatement en aviser celui-ci, Si nécessaire, lui faire parvenir des états modifiés en conséquence.

Article 102 Le vérificateur qui prend connaissance ou est informé d'une erreur ou d'un renseignement inexact et, selon lui, important, dans des états financiers ayant fait l'objet de son rapport, doit en informer chaque administrateur dans un délai ne dépassant pas (3) jours francs.

Les dirigeants ainsi informés doivent, dans les soixante (60) jours, préparer et publier des états financiers modifiés ou aviser les membres, la fédération à laquelle la CEC est affiliée, le cas échéant à la BRH.

Article 103 La BRH peut ordonner que la vérification annuelle des opérations d'une CEC soit reprise ou étendue ou qu'une vérification spéciale soit effectuée. Elle peut, à cette fin, nommer un vérificateur dont la rémunération est à la charge de la CEC.

SECTION 2.- CONCOURS EXCEPTIONNELS

Article 104 Faisant droit à une requête de la fédération à laquelle la CEC est affiliée, la BRH peut, pour prévenir la faillite d'une CEC, recourir au Fonds de Soutien aux Coopératives ou consentir une avance exceptionnelle aux conditions arrêtées par son conseil d'administration. La délibération du conseil doit être faite à l'unanimité des membres présents.

TITRE IV

DE LA FÉDÉRATION ET DE L’AFFILIATION DES CEC

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 105 Une CEC peut être affiliée à une seule fédération. La fédération garantit la liquidité et la solvabilité de ses membres.

Article 106 Un minimum de dix (10) CEC préalablement autorisées à fonctionner par la BRH est requis pour la constitution d'une fédération.

Article 107 Une copie certifiée conforme de la résolution de chacune des CEC fondatrices, les statuts de constitution de la fédération, ses règlements et ses normes sont transmis au CNC pour enregistrement et autorisation.

Article 108 Seules des CEC peuvent être membres d'une fédération. Peut être membre d'une fédération une CEC qui:

- 1) fait une demande d'affiliation, sauf dans le cas d'une CEC fondatrice
- 2) s'engage à respecter les statuts, règlements et les normes de la fédération
- 3) souscrit et paye le nombre de parts prévu par règlement de la fédération
- 4) est admise, sauf dans le cas d'une CEC fondatrice, par le Conseil d'administration de la fédération.

Une fédération établit, par règlement agréé par la BRH, les autres conditions d'affiliation de ses membres, leurs droits et obligations en tant que membres et les conditions relatives à leur désaffiliation ou exclusion.

Article 109 La décision d'une fédération relative à l'affiliation ou à l'exclusion d'une CEC doit être soumise par courrier prioritaire avec copie à la BRH et au CNC.

Une fédération peut exclure une CEC lorsque

- a) la CEC ne respecte pas les statuts, règlements et normes de la fédération;
- b) la CEC contrevient aux règles de déontologie;
- c) la CEC est dissoute.

Avis préalable de la décision d'exclusion doit être acheminé à la BRH et au CNC par courrier prioritaire. La CEC exclue d'une fédération doit avoir l'autorisation préalable de la BRH pour adhérer à une autre fédération. La BRH établit par règlement les conditions minimales dans lesquelles une CEC peut se désaffilier et adhérer à une autre fédération.

Article 110 Toute demande d'affiliation d'une CEC à une fédération ou toute demande de désaffiliation doit être autorisée par une résolution de son conseil d'administration mentionnant le non du représentant de la CEC autorisée à signer la demande, et être ratifiée au deux tiers des voix exprimées par les membres présents à une assemblée générale extraordinaire ou, pourvu que l'avis de convocation mentionne l'objet de la résolution, à une assemblée générale annuelle.

Article 111 Seules les fédérations de CEC sont admises à la chambre de compensation assurée par la BRH. Elles sont tenues de se soumettre aux directives de la BRH.

CHAPITRE II

ASSEMBLEES DE MEMBRES ET CONSEIL D'ADMINISTRATION

SECTION 1. - ASSEMBLEE DES MEMBRES

Article 112 L'assemblée générale d'une fédération se compose des représentants des CECs qui y sont affiliées.

Pour pouvoir délibérer valablement l'assemblée générale doit réunir les deux tiers (2/3) des membres. Lorsque le quorum prévu par la loi n'est pas atteint, après deux convocations faites de huitaine à huitaine, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Dans les assemblées générales, les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial signés par le président et le secrétaire du conseil d'administration.

Article 113 La fédération détermine, par règlement

- 1) la manière dont les CECs qui lui sont affiliées sont convoquées et représentées aux assemblées générales
- 2) les critères pour déterminer le nombre de représentants et de voix auquel a droit chacune de ces CECs.

SECTION 2.- CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 114 Les dirigeants d'une fédération, dont le nombre ne peut être inférieur à cinq (5) et supérieur à neuf (9), sont élus parmi les dirigeants des CECs qui lui sont affiliées ou parmi les personnes déterminées par règlement de la fédération.

Un dirigeant ne peut être:

- 1) un représentant d'une CEC affiliée depuis moins de quatre-vingt dix (90) jours, sauf s'il s'agit d'une CEC fondatrice

- 2) un employé de la fédération, sauf s'il s'agit du directeur général
- 3) un dirigeant ou un employé d'une autre fédération
- 4) un failli non réhabilité
- 5) une personne qui a fait l'objet d'une condamnation pour crime.

De plus, le conseil d'administration doit être composé en majorité par des dirigeants qui ne sont pas des directeurs généraux de la fédération et des CECs qui lui sont affiliées ni des personnes visées par le règlement de la fédération.

CHAPITRE II

FONCTIONNEMENT-POUVOIRS D'INSPECTION

SECTION 1.-FONCTIONNEMENT

Article 115 En plus des autres pouvoirs qu'elle peut exercer en vertu de la présente loi, toute fédération peut:

- 1) élaborer des politiques sur toute matière permettant aux CEC qui lui sont affiliées de réaliser leurs objets et d'exercer une gestion saine et prudente
- 2) examiner les livres et les comptes d'une CEC qui lui est affiliée
- 3) faire une convention avec le Conseil d'administration d'une CEC qui lui est affiliée pour surveiller, diriger ou administrer les affaires de la CEC pendant une période déterminée
- 4) participer avec une CEC qui lui est affiliée à l'établissement et à l'administration des services que cette dernière peut fournir
- 5) agir à titre d'administrateur provisoire ou à titre de liquidateur d'une CEC qui lui est affiliée
- 6) fournir aux personnes désireuses de constituer une CEC des services appropriés;
- 7) garantir, conformément à la loi, les engagements d'une CEC qui lui est affiliée
- 8) fournir à titre de mandataire d'une CEC qui lui est affiliée et avec l'accord de celle-ci, tout service que cette dernière peut offrir
- 9) Organiser des activités de formation et d'éducation économique, sociale et coopérative à l'intention des CEC.

SECTION 2.- POUVOIRS D'INSPECTION

Article 116 Une fédération peut adopter des normes applicables aux CEC qui lui sont affiliées portant sur:

- 1) les rapports qu'une CEC doit fournir aux fins de fixer les cotisations qu'elle peut exiger ainsi que leur forme et leur contenu
- 2) tout autre sujet financier ou relatif à une gestion saine et prudente.

Une fédération doit adopter des normes applicables aux CEC qui lui sont affiliées portant sur tout sujet visé au paragraphe 2) du premier alinéa lorsque requis dans l'intérêt de la fédération et de l'ensemble des CEC qui lui sont affiliées.

Article 117 Une fédération peut lorsqu'elle estime qu'une CEC qui lui est affiliée

- a) n'exerce pas une gestion saine et prudente,
 - b) contrevient aux règles de déontologie,
 - c) ne règle pas une situation de conflit d'intérêts,
 - d) a une situation financière insatisfaisante ou que son actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des déposants, des créanciers et des sociétaires:
1. donner des instructions écrites à cette CEC portant sur les mesures qu'elle estime appropriées pour corriger la situation et indiquer le délai dans lequel la CEC doit s'y conformer;
 2. ordonner à la CEC, dans le délai qu'elle prescrit et pour les motifs qu'elle indique d'adopter et d'appliquer un plan de redressement conforme à ses directives.

La fédération peut en outre donner des instructions écrites à une CEC, sur demande du Comité de surveillance.

La fédération doit transmettre, dans les dix (10) jours, à LA BRH une copie des instructions données ou des ordonnances rendues en application du présent article.

Article 118 Une fédération a tous les pouvoirs nécessaires pour combler les déficits d'opération d'une CEC qui lui est affiliée en cas d'insuffisance de sa réserve légale.

La fédération y pourvoit à même ses propres ressources ou au moyen de cotisations spéciales levées auprès des CECs qui lui sont affiliées ou à partir du fonds de soutien aux coopératives par requête adressée à la BRH.

Article 119 Une fédération peut, avec l'autorisation ou sur la demande de la BRH, suspendre pour une période maximale de six (6) mois les pouvoirs de Conseil d'administration, du Comité de surveillance ou du comité de crédit d'une CEC qui lui est affiliée et nommer un administrateur pour en exercer temporairement les responsabilités, lorsqu'elle a des raisons de croire

- 1) qu'il y a eu détournement ou absence inexplicable de biens;
- 2) qu'il y a eu faute grave ou manquement important dans l'exercice des obligations d'un dirigeant de la CEC ou de son Conseil d'administration;
- 3) que le contrôle sur les biens de la CEC est insuffisant pour protéger adéquatement les droits de ses sociétaires.

Toute prolongation de la période ci-dessus indiquée doit être approuvée par la BRH.

Article 120 L'inspection annuelle des CEC affiliées a notamment pour but d'évaluer les politiques et pratiques financières de la CEC de même que ses systèmes de contrôle interne et de s'assurer de la fiabilité de ses états financiers ainsi que de l'observance de la présente loi, des règlements et des normes qui lui sont applicables en vertu de la présente loi.

Article 121 Toute personne qui procède à une inspection ou aux examens et recherches en vertu du présent chapitre peut

- 1) entrer, à toute heure raisonnable, dans l'établissement d'une CEC qui fait l'objet de l'inspection ou des examens et recherches
- 2) examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités de cette CEC ou aux situations de conflit d'intérêts de ses dirigeants
- 3) rechercher ou exiger tout renseignement ou tout document relatif à l'application de la présente loi ou concernant la CEC, les situations de conflit d'intérêts de ses dirigeants ou les personnes morales faisant partie du même groupe que la fédération à laquelle la CEC est affiliée.

Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de celui qui effectue l'inspection ou les examens et recherches, lui en donner communication et lui en faciliter l'examen.

Article 122 La fédération rend compte de son inspection à la BRH. Elle transmet également une copie de son rapport au Conseil d'Administration et au Comité de Surveillance.

Article 123 La fédération peut convoquer, séparément ou conjointement, le Conseil d'Administration ou le Comité de Surveillance de la CEC.

Article 124 La fédération peut, à la suite de l'inspection ou des examens et recherches d'une CEC, ordonner la convocation d'une assemblée générale extraordinaire afin d'informer ses sociétaires.

Article 125 La personne qui procède à titre de responsable du dossier à l'inspection d'une CEC pour le compte d'une fédération ne doit pas être celle qui procède à la vérification de la CEC.

SECTION 3.- VERIFICATION

Article 126 Toute fédération doit chaque année faire vérifier ses livres et comptes par un vérificateur indépendant. A défaut par une fédération de faire vérifier ses livres et comptes ou de nommer un vérificateur indépendant conformément à la présente loi, la BRH peut nommer un vérificateur dont la rémunération est à la charge de la fédération.

Article 127 Le vérificateur d'une fédération doit être membre d'une association professionnelle de comptables reconnue par la loi. Il ne peut être un dirigeant, une personne à laquelle un dirigeant est lié, un employé ou un membre de la fédération dont il est chargé de faire la vérification.

Article 128 Les articles 102 à 103 de la présente loi s'appliquent également aux fédérations.

TITRE V

DE LA FUSION, DU DESSAISISSEMENT, DE LA LIQUIDATION ET DE LA DISSOLUTION

CHAPITRE I

FUSION

Article 129 Des CEC peuvent fusionner, soit en se mettant ensemble pour créer une nouvelle CEC, soit par absorption de CEC dites absorbées par une CEC dite absorbante. Toute fusion doit être autorisée préalablement par la BRH. Les CEC fusionnantes soumettent à la BRH, à l'appui de leur demande de fusion, en deux (2) exemplaires, une convention de fusion qui indique notamment:

- a) le nom de la CEC issue de la fusion, le nom de la fédération à laquelle elle sera affiliée, le cas échéant
- b) le nombre de parts émises dans chacune des CEC qui fusionnent. Le prix de chacune de ces parts, ainsi que leurs modes de conversions en parts de la CEC issue de la fusion
- c) le consentement de la fédération qui s'est engagée à accepter la CEC issue de la fusion comme membre, le cas échéant.

Cette convention doit, en outre, indiquer toute autre mesure relative à l'organisation et à la gestion de la CEC issue de la fusion.

Article 130 A compter de la date de la fusion, les CEC qui ont fusionnées continuent leur existence en une seule et même CEC, laquelle acquiert les droits de la CEC absorbée et en assume les obligations. Les procédures auxquelles les CEC fusionnées sont parties peuvent être continuées sans reprises d'instance.

CHAPITRE II

DESSAISISSEMENT

Article 131 Le dessaisissement est fait soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la BRH lorsque la gestion de la CEC ne peut plus être assurée dans les conditions normales, soit à l'initiative de la fédération lorsque la situation financière de la CEC est insatisfaisante ou son actif insuffisant.

Le dessaisissement a lieu quand la BRH suspend tous les pouvoirs des administrateurs et dirigeants d'une CEC. Elle exerce seule et sans concours de créanciers prétendus ou consacrés cette prérogative. Elle désigne alors un administrateur provisoire qui, sous son contrôle et sa responsabilité, reçoit tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la CEC.

Article 132 En cas de dessaisissement, la BRH fait immédiatement afficher dans les locaux de la CEC dessaisie et porte principale de la fédération à laquelle la CEC est affiliée, le cas échéant, un avis annonçant son action et l'heure à laquelle le dessaisissement prend effet. Le dessaisissement ne peut être rétroactif.

Dans les trois (3) mois qui suivent le dessaisissement, l'administrateur provisoire établit une situation comptable et dresse un inventaire de l'actif. Un exemplaire de ces deux documents est tenu à la disposition des parties intéressées pour examen.

Article 133 La levée judiciaire du dessaisissement peut être sollicitée par tout intéressé qui en aura produit la demande à la BRH. Le Tribunal saisi par ajournement ou par requête, n'ordonnera la levée du dessaisissement que si celui-ci est intervenu en contravention de la procédure fixée par la présente loi.

Article 134 L'administrateur provisoire, sous la supervision et selon les directives de la BRH, peut effectuer tous actes nécessaires ou accessoires à la poursuite des activités et au maintien de l'actif de la CEC.

Il peut notamment poursuivre ou interrompre les opérations de la CEC au nom de celle-ci, contracter et signer au nom de la CEC, ester en justice au nom de la CEC tant comme demandeur que comme défendeur, nommer ou révoquer les dirigeants, engager ou licencier le personnel et, en cas d'insuffisance de fonds, cesser ou limiter le remboursement des sociétaires et le paiement des autres créanciers.

Toutefois, l'administrateur ne peut vendre aucun immeuble de la CEC, ni hypothéquer aucun immeuble de celle-ci sans l'autorisation de la BRH.

Article 135 Tous les délais légaux ou contractuels, sauf ceux d'ordre public, sont de plein droit prorogés au profit de la CEC dessaisie pour une durée de six (6) mois à compter de la date de dessaisissement.

Article 136 Dans un délai ne dépassant pas douze (12) mois à compter de la date du dessaisissement, la BRH est tenue soit d'entamer la procédure de liquidation forcée, soit de mettre fin au dessaisissement.

CHAPITRE III

LIQUIDATION, DISSOLUTION

Article 137 Une CEC peut être dissoute pour les causes prévues par les statuts ou par le vote librement donné des deux tiers des membres réunis en assemblée générale extraordinaire. Lorsque la liquidation est prononcée, l'assemblée générale extraordinaire doit former immédiatement une commission de liquidateurs de trois membres au moins.

Avis de la dissolution doit être donné à la BRH, au CNC et à la fédération à laquelle la CEC est affiliée et au tribunal du lieu du siège social de la CEC, qui devra dans les trois

jours de la réception dudit avis, adresser au siège de la CEC l'inventaire des biens à liquider, le tout avec la participation des liquidateurs.

L'avis de dissolution est publié dans deux journaux à fort tirage à diligence de la BRH et affiché à la porte principale de la CEC, de la fédération à laquelle la CEC est affiliée, le cas échéant, et au tribunal du lieu du siège de la CEC. Le tribunal doit, sans frais, assister la commission de liquidation dans ses travaux et en dresser procès-verbal.

Article 138 Le Fonds de réserve ne peut servir qu'à acquitter les dettes au moment de la liquidation de la CEC. Vient en priorité, le paiement de l'épargne des petits déposants. La balance, s'il y en a une, doit être versée à la BRH, sur le compte « Fonds de soutien aux coopératives ».

TITRE VI

DES INFRACTIONS ET SANCTIONS

Article 139 Quand les CEC, leurs dirigeants et employés contreviennent aux dispositions de cette loi ou aux normes réglementaires édictées par la BRH, ils sont passibles des sanctions administratives suivantes:

- 1) Avertissement.
- 2) Interdiction temporaire de réaliser des opérations déterminées.
- 3) Révocation de l'autorisation de fonctionnement, conformément aux dispositions de cette loi.
- 4) Suspension des activités des dirigeants, membres du Conseil d'Administration, membres du Comité de Surveillance et du Comité de crédit. La suspension peut être temporaire ou permanente. Dans le premier cas, elle est appuyée par une résolution expresse de la BRH. Dans le second cas, on doit l'appliquer lorsqu'il existe deux ou plusieurs de ces sanctions au même cas selon la gravité des infractions.

Ces sanctions sont appliquées par la BRH, avec notification au CNC, sans préjudice de celles prévues par la loi, et de la responsabilité civile ou pénale qui peut découler de l'infraction. La BRH peut appliquer deux (2) ou plusieurs de ces sanctions au même cas selon la gravité des infractions.

Article 140 Les sanctions prévues à l'article précédent sont applicables à la CEC lorsque les infractions sont commises par celle-ci sous n'importe quelle forme; elles sont applicables aux dirigeants, membres du Conseil d'Administration, membres du Comité de Surveillance et du Comité de Crédit selon leur degré de responsabilité et d'initiative personnelle.

La sanction s'applique pour tous les actes et faits commis par négligence ou imprudence, imputables à toutes les catégories de personnes précédemment citées et qui auraient pu ou auraient dû être évités.

Article 141 Toute CEC qui, après inspection, est reconnue en état d'inactivité volontaire ou coupable de violation des prescriptions légales est invitée à se conformer à la Loi. Faute par elle de le faire dans un délai de trente (30) jours, l'autorisation de fonctionnement sera annulée par la BRH qui prend toutes mesures en vue de la liquidation de la CEC.

Article 142 Toute CEC ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles 3, 4, 5, 19, 20, 2i. 22 et 23 de la présente loi ne pourra se présenter sous la dénomination de "CAISSE POULAIRE", "COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT", ou toutes autres appellations similaires, le tout sous peine d'une amende de Cinq Cent mille gourdes (G

500,000.00) à prononcer par le Tribunal du lieu où siège la CEC, solidairement contre les fondateurs.

En cas de non paiement de l'amende, l'article 36 du Code Pénal sera applicable. En cas de récidive, l'amende sera de Sept cent Cinquante mille gourdes (G 750,000.00) ou de six (6) mois d'emprisonnement. Le Tribunal peut en outre ordonner la cessation des activités de la CEC.

Article 143 Les détournements de fonds et toutes autres irrégularités graves constatées dans les documents comptables, bilans et rapports sont justifiables du Tribunal Correctionnel et sont punis, en plus de la réparation des dommages causés d'un emprisonnement allant de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende allant de cinq cent mille gourdes (G 500,000.00) à un million de gourdes (G 1,000,000.00).

Ces cas sont jugés, toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle. Le Commissaire du Gouvernement prend l'initiative de l'action répressive sur toute plainte de la BRH, du CNC, de la fédération ou d'un groupe de vingt-cinq (25) sociétaires.

Article 144 Il est interdit à toute personne autre qu'une CEC d'effectuer les opérations visées à l'article 3.

Toutes les fois que les autorités (la BRH, le CNC, la fédération) ont des raisons de croire qu'une personne fait des opérations visées à l'article 3 sans l'autorisation requise par la Loi, elles doivent procéder à l'examen des livres, comptes et dossiers de cette personne pour s'assurer que tel est le cas.

Elles requièrent à cet effet la présence d'un Juge de Paix pour dresser un procès-verbal constatant les opérations illégales effectuées par cette personne et peut exiger la fermeture de l'entité dont il s'agit sans préjudice des sanctions pénales et des amendes prévues à l'article 146.

Article 145 Toute personne faisant des opérations visées à l'article 3 sans autorisation de fonctionnement, et refusant de produire pour examen les livres, comptes et dossiers requis par les autorités, est passible d'une amende de cinquante mille gourdes (G 50,000.00) par jour d'infraction sans toutefois excéder un maximum de cinq millions de gourdes (G 5,000,000.00).

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 146 Les CEC dûment agréées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont considérées comme autorisées à fonctionner ou reconnues d'office sur simple déclaration au CNC.

Elles disposent d'un délai d'un (1) an, à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi, pour se conformer à ses dispositions.

Toutefois, il est fait obligation aux CEC de se mettre à jour dans les trois (3) mois suivant la promulgation de la présente loi, en communiquant au CNC les informations minimales suivantes

1. Bilan d'ouverture
2. Bilan à date
3. Etat de profits et de pertes à date
4. Règlements internes
5. Nombre de membres
6. Zone d'intervention
7. Toute autre information requise par la BRH ou par le CNC.

La non communication de ces informations, dans le délai de trois (3) mois peut entraîner le retrait de l'autorisation de fonctionnement qui peut amener soit à la restructuration soit à la liquidation de la CEC.

Le CNC se chargera de communiquer à la BRH un dossier complet et à jour sur chacune des coopératives reconnues à fonctionner d'office.

Article 147 Toute CEC est tenue de s'acquitter de leurs engagements envers leurs sociétaires sous peine de tomber sous le coup des dispositions de la présente Loi.

Article 148 Les CEC peuvent comme toute forme de coopérative engager des poursuites légales pour recouvrer les valeurs non remboursées par leurs sociétaires.

Article 149 Le fonctionnement des CEC est régi par les lois du commerce en vigueur et les litiges pouvant survenir avec les salariés des CEC relèvent du Code du Travail.

Article 150 Les cas non spécialement prévus par la présente loi, ni par les statuts, règlements ou actes constitutifs des coopératives, seront résolus conformément aux principes coopératifs généralement admis et aux prescriptions du code civil qui, par leur nature et leur similitude, peuvent être appliquées aux CEC.

Article 151 La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Ministres de la Planification et de la Coopération Externe, de l'Economie et des Finances, de la Justice, chacun en ce qui le concerne.

4.21. HONDURAS

LEY DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA

PODER LEGISLATIVO
C O N T E N I D O
DECRETO NÚMERO 193-85
OCTUBRE DE 1985

EL CONGRESO NACIONAL

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con el Artículo 330 de la Constitución de la República, La economía nacional se sustenta en la coexistencia democrática y armónica de diversas formas de propiedad y de empresa.

CONSIDERANDO: Que la Constitución reconoce, garantiza y fomenta entre otras, la libertad de empresa a todos los hondureños.

CONSIDERANDO: Que el Estado ha venido emitiendo medidas legislativas tendientes a garantizar la participación de los sectores campesinos y obreros, en el desarrollo de actividades económicas de acuerdo con el principio constitucional de justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacionales, en que se fundamenta el Sistema Económico de Honduras.

POR TANTO:
D E C R E T A
La siguiente,

LEY DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA.

ARTICULO: 1

Declárese de interés público la organización, fomento y desarrollo del Sector Social de la Economía, para contribuir a humanizar el desarrollo económico y social del país, de acuerdo con los principios de eficiencia en la producción, justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacional, coexistencia democrática y armónica en las diversas formas de propiedad y empresas en que se sustenta el Sistema Económico de Honduras, de acuerdo con la Constitución de la República.

ARTICULO 2

Se define el Sector Social de la Economía como el conjunto de empresas y organizaciones formadas por trabajadores que sostienen la primacía del trabajo, optan por la propiedad social de los medios de producción y establecen que el excedente generado es un medio para elevar el nivel de vida de sus miembros. El Sector Social de la Economía se fundamenta en Los principios de libertad, democracia económica, justicia, solidaridad, autogestión, participación y pluralismo.

ARTICULO 3

El Sector Social de la Economía estará integrado por las asociaciones cooperativas, empresas asociativas de campesinos, empresas cooperativas agroindustriales y en general, por todas aquellas empresas constituidas exclusivamente por trabajadores que, de acuerdo con las leyes, se dediquen a la producción, industrialización, comercialización, prestación de servicios y otras actividades económicas, que sean de beneficio común de sus asociados y contribuyan al desarrollo económico y social del país.

ARTICULO 4

El Sector Social de la Economía tendrá su propia estructura orgánica, con un organismo a nivel nacional de dirección y representación, pudiendo crearse organismos regionales o departamentales según las necesidades del Sector.

Los organismos de dirección y representación a que se refiere el párrafo anterior, se estructurarán con la participación de las empresas que constituyan el Sector Social.

ARTICULO 5

Corresponde exclusivamente al Estado, sus Instituciones y a las organizaciones de obreros y campesinos, en forma conjunta definir el organismo a nivel de la estructura gubernamental para establecer relaciones en materia de promoción, organización, desarrollo, fomento y financiamiento de las empresas del Sector Social de la Economía.

En el Plan Nacional de Desarrollo deberán identificarse las áreas o actividades económicas en que el Estado y el organismo nacional de dirección y representación del Sector Social de la Economía, promoverán y fomentarán la constitución y desarrollo de empresas de interés social.

ARTICULO 6

El Estado creará y fomentará un Fondo de Desarrollo para financiar el Sector Social de la Economía.

ARTICULO 7

Los asociados de las empresas del Sector Social de la Economía tendrán, además, el carácter de propietarios y empresarios de las mismas. En consecuencia, los servicios que

Presten personalmente no Constituyen relación laboral, ni Son objeto de contrato de trabajo.

No obstante lo anterior, los asociados estarán protegidos por el régimen del Seguro Social Obligatorio.

ARTÍCULO 8

Es condición fundamental en las empresas del Sector Social de la Economía, que los asociados presten en ellas sus servicios directa y personalmente.

Excepcionalmente Una empresa podrá contratar por el tiempo estrictamente necesario, personas distintas a sus asociados para la prestación de servicios de cualquier género, según lo determine la ley que regule dicha empresa.

ARTICULO 9

En los contratos que celebren las empresas del Sector Social de la Economía para la prestación de servicios técnicos, así como de dirección o administración, deberá estipularse La obligación del personal contratado de entrenar a los asociados que los sustituirán.

ARTICULO 10

Los trabajadores asalariados de las Empresas de Interés Social, tendrán derecho preferente para ingresar como asociados de la misma, cuando reúnan los requisitos establecidos en la ley y en los reglamentos que regulen dicha empresa.

ARTICULO 11

Para cubrir las necesidades básicas familiares, los asociados tendrán derecho a percibir, con cargo a los excedentes, una asignación anticipada no reembolsable, en la cuantía y épocas que acuerde la Asamblea General.

Serán aplicables a la asignación indicada, en el párrafo anterior las disposiciones legales que regulen el salario, para efectos de asegurar su protección.

ARTICULO 12

Los excedentes netos que obtengan las Empresas del Sector Social de la Economía al final de cada ejercicio económico se distribuirán de acuerdo con lo previsto en las respectivas leyes, reglamentos y estatutos que las rijan, y en su defecto, de conformidad con las disposiciones que a continuación se indican.

De los excedentes o utilidades netas de cada período se constituirán los fondos de:

- a) Capitalización:
- b) Reserva, para los casos de pérdidas;
- c) Vivienda, educación y salud; y,
- ch) Previsión Social y capacitación.

Una vez cubiertos los fondos anteriores, el remanente de los excedentes podrá distribuirse entre los asociados en la forma en que determine la Asamblea General.

ARTICULO 13

Cuando una Empresa del Sector Social de la Economía celebre contratos de préstamo con el Estado o sus instituciones, o sea beneficiaria de garantías otorgadas por éstos, el Poder Ejecutivo, por medio del organismo definido de conformidad con el Artículo 5 de la presente Ley con la participación del organismo nacional de dirección y representación del Sector Social de la Economía, deberá ejercer la debida vigilancia o control sobre la inversión o el destino de los fondos, objeto del préstamo o garantía.

La empresa estará obligada a proporcionar la información, documentos y facilidades que se requieran para cumplir debidamente las referidas actividades de vigilancia y control de la inversión.

Lo dispuesto en este Artículo, se entiende sin perjuicio de las funciones de vigilancia interna de las operaciones de la empresa que se hallen a cargo del órgano previsto en las respectivas leyes, reglamentos o estatutos.

ARTICULO 14

Las empresas del Sector Social De la Economía, no podrán en ningún caso organizarse, fusionarse ni transformarse en sociedades mercantiles. Será nulo todo acto o contrato que contravenga esta disposición.

ARTICULO 15

Todo lo referente a la constitución, registro y funcionamiento de las Empresas del Sector Social de la Economía, se registrará de acuerdo con lo previsto en las leyes y reglamentos respectivos.

ARTICULO 16

Bajo las regulaciones de la presente Ley, podrán constituirse empresas de trabajadores que no estén organizadas como asociaciones cooperativas, Empresas asociativas campesinas o empresas cooperativas agro-industriales.

ARTICULO 17

El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los treinta y un días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y cinco.

JOSE EFRAIN BU GIRON

Presidente

MARIO ENRIQUE PRIETO ALVARADO

Secretario

JUAN PABLO URRUTIA RAUDALES

Secretario Al Poder Ejecutivo.

Por Tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, D.C., 14 de Noviembre de 1985.

ROBERTO SUAZO CORDOBA

Presidente

El Secretario de Estado en los Despachos de Economía y Comercio.

Miguel Orellana Maldonado

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.

Arnulfo Pineda López

LEY DE COOPERATIVAS

DECRETO LEGISLATIVO 65/87

(del 30 de abril de 1987)

TITULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1

Declárase de necesidad nacional y de interés público, la promoción y la protección del cooperativismo, como uno de los sistemas eficaces para el desarrollo económico de la Nación, el fortalecimiento de la democracia, la realización de la justicia y la defensa de los valores y los derechos humanos.

Artículo 2

El Estado garantiza el libre desarrollo del cooperativismo y la autonomía de las cooperativas como entidades privadas. El cooperativismo constituye un sector especial, con personalidad propia dentro de la economía y la sociedad nacional.

Artículo 3

El Sector Cooperativista tendrá representación propia en los organismos del Estado ligados con la economía y el desarrollo nacional; cuando así lo determine la Ley.

Artículo 4

Son actos cooperativos aquellos en que intervengan por sí, una o más cooperativas, toda vez que no signifiquen actos de comercio o civiles, expresamente definidos en códigos especiales. Los actos cooperativos se regirán por las disposiciones de esta Ley.

Artículo 5

En los actos cooperativos se promoverá el mejoramiento económico y social de los cooperativistas, su condición humana y su formación individual y familiar, para lo cual el móvil de su realización deberá ser primordialmente el servicio y no el lucro.

TITULO II

COOPERATIVAS Y COOPERATIVISTAS

CAPITULO I

DE LAS COOPERATIVAS

Sección Primera

Definición y requisitos

Artículo 6

Las cooperativas son organizaciones privadas, voluntariamente integradas por personas que, constituidas conforme a esta Ley e inspirados en el esfuerzo propio y la ayuda mutua, realizan actividades económico-sociales, a fin de prestar a sí mismas y a la comunidad, bienes y servicios para la satisfacción de necesidades colectivas e individuales.

Artículo 7

Las Cooperativas para que sean reconocidas como tales, deberán llenar para su organización y funcionamiento, las siguientes condiciones:

- a) Funcionar sobre principios de igualdad en derechos y obligaciones de los cooperativistas, concediendo a cada uno de ellos un sólo voto, cualquiera que sea el monto de aportaciones que posea; libre adhesión y retiro voluntario; neutralidad política partidista, étnica y religiosa;
- b) Funcionar con un número ilimitado de cooperativas;
- c) Operar con recursos económicos variables y duración indefinida;
- ch) Prestar, a sí misma y a los particulares, bienes y servicios, para la satisfacción de necesidades colectivas e individuales;

- d) Distribuir los excedentes sociales en proporción al patrocino;
- e) Pagar un interés sobre el valor de las aportaciones pagadas;
- f) Establecer en el Acta Constitutiva el compromiso de una asignación presupuestaria en un monto no menor a los porcentajes establecidos en el Reglamento de esta Ley, para fomentar la educación cooperativista;
- g) Comprometerse a integrar en los organismos de diferentes grados y naturaleza que sean necesarios para el mejor cumplimiento de sus objetivos; y,
- h) Tener Estatutos debidamente aprobados por la Asamblea Constitutiva o por la siguiente Asamblea General.

Artículo 8

Son objetivos de las cooperativas:

- a) Mejorar la condición económicas, social y cultural de los cooperativistas y de la comunidad en que actúan;
- b) Aumentar el patrimonio de los cooperativistas y el nacional, mediante el incremento de la producción y la productividad, el estímulo al ahorro, la inversión, el trabajo y la sana utilización del crédito;
- c) Aumentar la renta nacional y las posibilidades de empleo; incrementar y diversificar las exportaciones e impulsar el uso racional de los recursos naturales;
- ch) Estimular la iniciativa individual y colectiva, la solidaridad, la auto-ayuda y el espíritu de responsabilidad en todos los estratos de la población, para la solución de sus problemas económicos y sociales en particular y los del país en general;
- d) Coadyuvar con el Estado y sus Instituciones en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo económico y social;
- e) Fomentar la educación cooperativistas; y,
- f) Los demás que se establezcan en los Estatutos respectivos.

Sección Segunda

Constitución y Personalidad

Artículo 9

La Constitución de las cooperativas se hará en documento privado, legalmente autenticado. En las cooperativas de centros educativos, las Actas de Constitución serán autorizadas por el Director del centro educativo respectivo, sin necesidad de autenticar.

Artículo 10

Ninguna cooperativa podrá constituirse con un número menor de veinte (20) cooperativas, sin perjuicio de lo que establezca el Reglamento de esta Ley, en cuanto a un número mayor para sub-sectores especiales.

Artículo 11

La personalidad jurídica de las cooperativas nace desde la inscripción de su documento constitutivo en el Registro Nacional de Cooperativas.

Artículo 12

Las cooperativas tendrán su domicilio en el lugar que se señale en el documento de constitución; en su defecto, en el lugar en donde tengan sus oficinas o establecimientos principales.

Artículo 13

Las organizaciones cooperativas deben incluir en su denominación social la palabra que según el nivel de integración le corresponde conforme al Artículo 88 de esta Ley, indicando la naturaleza de su actividad principal y la mención de que la responsabilidad es limitada.

Artículo 14

Las cooperativas no adoptarán denominaciones que induzcan a suponer un campo de operaciones distinto del previsto en los Estatutos, ni la existencia de un propósito contrario a las prohibiciones que establece la Ley.

Artículo 15

Las cooperativas pueden asociarse con personas de otra condición jurídica, si no se desvirtúa su propósito de servicio, ni se viola la Ley.

Artículo 16

Son cooperativas en formación, las constituidas y no inscritas en el Registro Nacional de Cooperativas.

El período de formación no podrá ser mayor de un año, contado desde la fecha de la suscripción del Acta Constitutiva. Durante ese período llevarán junto a la denominación social, las palabras "en formación" y estarán facultadas para ejecutar actos frente a terceros. En este caso, la responsabilidad de los suscriptores será solidaria.

Artículo 17

Las sociedades mercantiles en proceso de convertirse en cooperativas, por acción y participación de sus trabajadores, tendrán los mismos derechos y obligaciones que las cooperativas en formación.

Artículo 18

Las cooperativas podrán organizar centros regionales o filiales en otras zonas del territorio nacional, o en el extranjero, previo dictamen favorable del Organismo rector del cooperativismo, quien para emitir el dictamen deberá consultar:

- a) La conveniencia económica y social de la expansión de la cooperativa; y,
- b) La seguridad de que la regional o filial no perjudicará los intereses de otra cooperativa hondureña organizada en la zona o región de que se trate.

Artículo 19

Las cooperativas no hondureñas podrán operar en el país con permiso previo del Organismo rector del cooperativismo; para concederlo, tomará en cuenta lo ordenado en los literales a) y b) del Artículo anterior y la reciprocidad con el país de origen. El permiso del Organismo rector surtirá efecto desde su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas.

**Sección Tercera
Administración y Vigilancia****Artículo 20**

Las cooperativas serán dirigidas y administradas por la Asamblea General, la Junta Directiva y la Gerencia.

Artículo 21

La fiscalización y la vigilancia en las cooperativas estará a cargo de la Junta de Vigilancia. Sin embargo, y de conformidad al Reglamento de esta Ley, en los Estatutos podrán contemplarse otros organismos y mecanismos de fiscalización, sustitutivos, complementarios o auxiliares de esa Junta.

Las cooperativas deberán efectuar anualmente, por lo menos una auditoria de sus operaciones.

Artículo 22

La Asamblea General legalmente convocada y reunida, es la autoridad suprema de la cooperativa y expresa la voluntad colectiva de la misma. Las facultades que la Ley, sus Reglamentos o los Estatutos no atribuyan a otro órgano de la cooperativa, serán competencia de la Asamblea General.

Artículo 23

Las sesiones de la Asamblea General podrán ser ordinarias y extraordinarias.

Artículo 24

La Asamblea General celebrará por lo menos una sesión ordinaria al año, dentro de los tres meses siguientes a la finalización de cada ejercicio social.

Artículo 25

Serán nulos los acuerdos que tome la Asamblea General, contraviniendo la Ley, los Reglamentos y los Estatutos.

Artículo 26

La Junta Directiva estará integrada por el número de miembros que establezcan los Estatutos; dicho número será impar y nunca menor de cinco.

Artículo 27

La representación legal de la cooperativa estará a cargo del Presidente de la Junta Directiva, quien podrá delegarla según dispongan los Estatutos.

Artículo 28

Para ser Directivo se requiere:

- a) Ser mayor de edad y miembro de la cooperativa respectiva;
En las cooperativas de centros educativos no será necesario el requisito de la edad.
- b) No ser cónyuges o parientes entre sí o con miembros del Órgano de Vigilancia, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
- c) Saber leer y escribir;
- ch) Haber pagado el mínimo de aportaciones exigido por los Estatutos; y,
- d) Estar solvente con la cooperativa.

Artículo 29

La responsabilidad de los Directivos será solidaria y cubre:

- a) La efectividad de los pagos efectuados por los cooperativistas a la cooperativa y viceversa;
- b) La autenticidad de los excedentes obtenidos o de las pérdidas sufridas por la cooperativa;
- c) La existencia de los libros sociales y la veracidad de las anotaciones hechas en los mismos; y,

ch) En general, velar por el cumplimiento de las obligaciones que imponen la Ley, los Reglamentos y los Estatutos.

Artículo 30

El Directivo que hiciere salvedad de su voto estará exento de responsabilidad por un acto que la mayoría de los Directivos acordaren. La salvedad se consignará obligatoriamente en el acta correspondiente.

Artículo 31

Los Gerentes serán nombrados por la Junta Directiva, quienes para entrar en el desempeño de sus funciones, deberán rendir caución suficiente para garantizar su gestión, misma que será fijada y calificada por la propia Junta Directiva.

El Reglamento de esta Ley determinará los montos, clases, formas y modalidades de la garantía y no podrá ser cancelada, en tanto no se extienda al afianzado el finiquito correspondiente, de parte del organismo rector del cooperativismo.

Artículo 32

La Asamblea General elegirá anualmente de su seno, una Junta de Vigilancia, compuesta por el número de miembros que establezcan los Estatutos, en número no menor de tres. Para ser miembro de la Junta de Vigilancia se requerirán las mismas condiciones que para ser Directivo.

Artículo 33

La Junta de Vigilancia tendrá todas las facultades necesarias para fiscalizar, revisar procedimientos administrativos y contables a investigar por sí o en forma delegada, cualquier irregularidad de orden a investigar por sí o en forma delegada, cualquier irregularidad de orden legal, financiero o económico-administrativo que se le denuncie o detectare, y los órganos administrativos de la cooperativa estarán obligados a facilitarle al efecto, el conocimiento de todos los libros y documentos que el Órgano de Vigilancia estime necesarios.

Las recomendaciones que hiciere la Junta de Vigilancia serán de obligatorio cumplimiento por la Junta Directiva, salvo lo dispuesto en el Artículo 35

En caso de conflicto sobre el cumplimiento de las recomendaciones decidirá la Asamblea General.

La Junta de Vigilancia será solidariamente responsable con la Junta Directiva en los términos establecidos en el Artículo 29, cuando hubiere omisión o negligencia en el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 34

En el presupuesto anual de la cooperativa se establecerá una partida para sufragar los gastos de la Junta de Vigilancia.

Artículo 35

La Junta de Vigilancia no puede intervenir en los actos administrativos de exclusiva competencia de la Junta Directiva y de la Gerencia.

Artículo 36

Toda cooperativa deberá anotar sus operaciones contables y las actuaciones de sus órganos directivos en libros, hojas u otros registros debidamente autorizados por el Organismo rector del cooperativismo, conforme a lo establecido en el Reglamento.

Artículo 37

Será obligatorio para las cooperativas llevar los libros siguientes:

- a) Libro de Actas de Asamblea General;
- b) Libro de Actas de la Junta Directiva;
- c) Libros de Actas de la Junta de Vigilancia o del órgano de fiscalización que se hubiere adoptado;
- ch) Libro de Registro de Cooperativistas;
- d) Libro de Aportaciones;
- e) Libro Diario General;
- f) Libro Mayor General; y,
- g) Libro de Inventarios y Balances.

Artículo 38

Las cooperativas estarán obligadas a exhibir sus libros a los funcionarios del Organismo rector del cooperativismo, autorizados para practicar revisiones y a otras personas o instituciones autorizadas por disposición de la Ley o en virtud de mandato judicial. Igualmente a enviar la información estadística que requiere este mismo Organismo.

Artículo 39

Las cooperativas que ofrecen bienes o servicios al público estarán obligadas a:

- a) Participar al público por un medio de comunicación social, la iniciación de sus operaciones y la apertura de sus establecimientos o despachos, indicando las actividades principales de su giro, su domicilio, las direcciones y nombres de sus filiales y establecimientos, y los nombres de los representantes de la cooperativa;
- b) Notificar de igual manera cualquier modificación que sufran los datos indicados en el numeral precedente; y
- c) Comunicar al público su disolución, liquidación y el cierre de sus establecimientos.

Artículo 40

Las cooperativas que solamente operen con sus miembros, también están sujetas a las obligaciones establecidas en el Artículo anterior.

Sección Cuarta

Recursos económicos

Artículo 41

Los recursos económicos de las cooperativas serán variables y podrán constituirse en la forma siguiente:

- a) Con las aportaciones y los ahorros de los cooperativistas, así como con los excedentes capitalizados y las reservas acumuladas;
- b) Con bienes muebles o inmuebles, trabajo, industria, capacidad profesional o fuerza productiva que aporten los cooperativistas;
- c) Con donaciones, herencias, legados, préstamos, créditos, derechos y privilegios que reciban de personas naturales o jurídicas; y
- ch) Con el producto de las ventas de certificados de participación y/o bonos que la cooperativa emita. Los certificados y bonos antes mencionados devengarán el interés que fije la Junta Directiva y no serán negociables.

Artículo 42

Las aportaciones totalmente pagadas devengarán un interés que fijará anualmente la Junta Directiva. Los intereses devengados podrán ser capitalizados total o parcialmente, por decisión de Asamblea General.

Artículo 43

Se consideran excedentes, los saldos que a favor de una cooperativa resulten de sus operaciones al final de cada ejercicio social.

Artículo 44

Los excedentes se distribuirán en la forma siguiente:

a) Por lo menos un 10% para formar un fondo de reserva legal, acumulable anualmente, no repartible y que servirá para cubrir pérdidas.

De acuerdo con la liquidez de la cooperativa y en los porcentajes que establezca el Reglamento de esta Ley, el fondo de reserva legal se invertirá en bonos u otros títulos de fácil convertibilidad emitidos por federaciones de cooperativas, instituciones bancarias o del Estado;

b) La formación de fondos especiales.

c) Distribuciones entre los cooperativistas de acuerdo al volumen de operaciones efectuadas con la cooperativa. La Asamblea General podrá acordar la capitalización total o parcial de los excedentes distribuidos y no pagados.

Artículo 45

Los excedentes netos generados por operaciones con no afiliados, se destinarán por la cooperativa preferentemente a programas de desarrollo cooperativista.

Artículo 46

Las pérdidas anuales se cubrirán con el Fondo de Reserva Legal, de conformidad con las disposiciones que emita la Junta Directiva.

En caso de liquidación de la cooperativa, las pérdidas se distribuirán entre los cooperativistas en proporción al monto de sus aportaciones.

Sección Quinta Clasificación

Artículo 47

Las cooperativas serán de producción, de servicios, de consumo o mixtas.

Artículo 48

La cooperativa será de producción, cuando esté constituida por personas que se asocian para trabajar, producir, transformar y vender en común los productos que elaboran.

Artículo 49

La cooperativa será de servicio, cuando esté formada por personas que se asocien para la prestación de servicios al público y a sí mismas.

Artículo 50

La cooperativa será de consumo, cuando esté formada por personas que se asocien para obtener en común bienes o servicios para ellas , sus hogares o sus actividades económicas y sociales.

Artículo 51

Serán mixtas las cooperativas, cuando en sus Estatutos establezcan actividades múltiples como su objetivo principal. Las cooperativas mixtas regularán cada una de sus actividades, ajustándolas a los conceptos contenidos en los Artículos 48, 49 y 50.

Artículo 52

Las cooperativas deberán utilizar los servicios de sus cooperativistas en los trabajos, obras que emprendieren y servicios que presten. Excepcionalmente, las cooperativas de producción podrán ocupar mano de obra asalariada, en los casos que determine el Reglamento de esta Ley.

Artículo 53

Las cooperativas de producción que empleen asalariados, deberán admitirlos como cooperativas cuando hubieren cumplido un año ininterrumpido de laborar para la cooperativa, siempre que lo soliciten y cumplan los requisitos que al efecto dispongan los Estatutos.

Artículo 54

En las condiciones que disponga el Reglamento, las cooperativas podrán operar con no cooperativistas.

Artículo 55

Las cooperativas serán patronos cuando para el desarrollo de sus actividades utilicen trabajo asalariado de sus cooperativistas o terceros. Se exceptúan aquellas cooperativas en las que la calidad de cooperativista, requiera la aportación de trabajo.

Sección Sexta

Régimen tributario-prohibiciones y sanciones

Artículo 56

Las cooperativas gozarán de las exenciones fiscales siguientes:

a) Exoneración de los impuestos fiscales que graven la renta, los bienes y las operaciones de las cooperativas. Se exceptúa el pago de las contribuciones para régimen de seguridad social;

b) Exoneración de derechos arancelarios, incluyendo el consular, impuestos y recargos de aduana sobre la importación de maquinaria, equipo, herramientas, vehículos de trabajo y de transporte de pasajeros, motores, accesorios, repuestos, útiles y enseres de trabajo, semillas seleccionadas, fertilizantes, insecticidas, herbicidas, fungicidas, pesticidas, animales de reproducción y materias primas, que necesiten las cooperativas para contribuir al desarrollo de la agricultura, silvicultura, apicultura, pesca, agroindustria, ganadería, transporte e industria, incluyendo en esta última expresión la industria de la construcción de casas para asociados de cooperativas, de vivienda legalmente organizadas o programas de vivienda que desarrollen las cooperativas para sus miembros, siempre que tales artículos o medios no se produzcan o manufacturen en el país o que la producción nacional no satisfaga sus necesidades.

Igualmente las cooperativas de servicio de consumo gozarán de las excepciones mencionadas en este inciso en la importación de bienes necesarios para la prestación de servicios a sus miembros;

c) Del pago de impuestos sobre donaciones, herencias y legados, que reciban de parte de cualquier persona natural o jurídica, hondureña o extranjera;

ch) De los impuestos que graven la tradición de bienes inmuebles en los programas de vivienda cuando la cooperativa sea tradente; y,

d) Exoneración de impuestos de exportación para productos no tradicionales.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reglamentará la concesión de las franquicias a que se refiere el literal b) de este Artículo.

Artículo 57

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá revocar, suspender o restringir las exenciones a una cooperativa, al comprobarse por el Instituto Hondureño de Cooperativas que aquella está haciendo uso indebido de ellas. En su comprobación el organismo rector del cooperativismo oírá previamente a la cooperativa afectada.

Artículo

58

Las exenciones establecidas en esta Ley se entienden para las cooperativas de cualquier grado y sus entidades auxiliares.

Artículo 59

Los cooperativistas gozarán de un crédito contra el Impuesto sobre la Renta que deberán pagar individualmente, en un cinco por ciento (5%) de promedio anual de los ahorros y aportaciones que hubieren mantenido en las cooperativas. Este crédito en ningún caso excederá del límite establecido por la Ley del Impuesto sobre la Renta para cuentas de ahorros en bancos hondureños.

Artículo 60

Los patronos estarán obligados a deducir de los salarios de sus trabajadores y empleados, previa su autorización por escrito, las cumas que por cuotas, aportaciones o cualquier otro concepto, deban hacer efectivas como afiliados a sus cooperativas.

Artículo 61

A ninguna cooperativa le será permitido:

- a) Funcionar o convertirse en sociedad mercantil o en sociedad civil;
- b) Conceder ventajas y privilegios a los iniciadores, fundadores, administradores o dirigentes, sobre parte alguna de los recursos económicos; y,
- c) Hacer participar a personas jurídicas y de otra índole del sector comercial, industrial y/o de servicio, directa o indirectamente, de los derechos y exenciones que esta Ley otorga a las organizaciones cooperativas de cualquier grado.

Artículo 62

Es prohibido el uso de emblemas, símbolos, distintivos, membretes, denominaciones o vocablos como cooperativa, cooperativista u otros, cuando tal uso puede inducir o suponer que los usuarios de los mismos están constituidos conforme a esta Ley sin estarlo.

La contravención de esta prohibición hará incurrir en responsabilidad civil y criminal a las personas naturales individualmente culpables, así como a los socios o asociados de las personas colectivas transgresoras con personalidad jurídica o sin ella.

Artículo 63

A los infractores de esta Ley y de su Reglamento, se les aplicarán las sanciones siguientes:

- a) Llamada de atención;
- b) Multa;
- c) Suspensión de derechos y privilegios;
- ch) Inhabilitación temporal o permanente en el caso de cooperativas directivos;
- d) Deducción de responsabilidad criminal en el caso, si la hubiere;
- e) Intervención temporal de la cooperativa;
- f) Remoción de directivos; y,

g) Disolución de la cooperativa.

Artículo 64

Para la aplicación de las sanciones del Artículo anterior se tomará en cuenta la gravedad de la infracción, su importancia social o económica y los perjuicios causados. En todo caso, el infractor gozará del derecho de defensa.

Sección Séptima

Disolución y liquidación

Artículo 65

La disolución de una cooperativa puede ser voluntaria o coactiva.

Artículo 66

Se reputará disolución voluntaria, la acordada por Asamblea General en sesión extraordinaria convocada al efecto.

Las cooperativas que sean deudoras del Gobierno de la República por préstamos o garantías, sólo podrán disolverse con la autorización previa del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Economía y Comercio.

Artículo 67

Se considera coactiva la disolución cuando de oficio o a instancia de parte, la disponga el organismo rector del cooperativismo, fundándose en cualesquiera de las causales siguientes:

- a) Imposibilidad de realizar el fin principal de la cooperativa;
- b) Que por un año el número de cooperativas permanezca inferior al mínimo legal;
- c) Que por un año los recursos económicos sean inferiores al monto mínimo fijado en el Acta de Constitución;
- d) Por haber sido declarada en quiebra conforme con la Ley; y,
- e) Violaciones reiteradas a la Ley, a su Reglamento o a los Estatutos.

Artículo 68

La disolución surtirá efectos a partir de la cancelación de su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas.

Artículo 69

Disuelta la cooperativa se pondrá en liquidación a cuyo caso los recursos económicos se destinarán:

- a) A satisfacer las deudas de la cooperativa y los gastos de liquidación;
- b) A pagar a los cooperativistas el valor de sus aportaciones; y,
- c) A distribuir entre los cooperativistas el excedente social, en proporción a las aportaciones pagadas, salvo el fondo de reserva y demás fondos sociales y de educación, los cuales se destinarán y entregarán al organismo rector del cooperativismo.

Artículo 70

La liquidación se hará por medio de una Comisión liquidadora designada por la Asamblea General que acuerde la disolución o por el Organismo Rector del Cooperativismo, si aquella fuese coactiva. En el primer caso, además de los designados por la Asamblea, integrará la Comisión un representante de dicho Organismo Rector. Los liquidadores practicarán la liquidación en la forma prevista por esta Ley.

CAPITULO II DE LOS COOPERATIVISTAS

Artículo 71

Son cooperativistas las personas naturales o jurídicas afiliadas a una cooperativa conforme a esta Ley.

Artículo 72

Podrán ser cooperativistas las personas naturales mayores de dieciséis años, podrán serlo también las organizaciones cooperativas y otras personas jurídicas no cooperativas siempre que éstas no persigan finalidades de lucro. En las cooperativas de centros educativos no se requerirá edad mínima para ser cooperativista.

Artículo 73

La calidad de cooperativista se adquiere por suscripción del Acta Constitutiva o por admisión hecha por la Junta Directiva. La responsabilidad de los cooperativistas se limita al monto de aportaciones.

Artículo 74

Toda persona podrá pertenecer a más de una cooperativa, salvo las excepciones que establezca el Reglamento.

Artículo 75

Los cooperativistas tendrán respecto de sus cooperativas, los deberes siguientes:

- a) Cumplir sus obligaciones sociales y pecuniarias;
- b) Hacer uso de los servicios de la cooperativa;
- c) Aceptar y desempeñar los cargos para los que fueren electos;
- ch) Acatar y cumplir las resoluciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; y,
- d) Los demás que dispongan los Estatutos.

Artículo 76

En sus cooperativas, los cooperativistas tendrán los derechos siguientes:

- a) Igualdad de derechos con respecto a los demás miembros de la organización;
- b) Voz y voto en las reuniones y asambleas de cooperativistas;
- c) Solicitar la convocatoria de la Asamblea General conforme a los Estatutos;
- ch) Estar informado de los resultados de la gestión social;
- d) Impugnar conforme a la Ley, las decisiones de la Asamblea General, la Junta Directiva, la Junta de Vigilancia, la Gerencia o cualquier otro órgano de la Cooperativa;
- e) Solicitar ante la Junta Directiva del organismo rector del cooperativismo la normalización jurídica de la cooperativa;
- f) Designar beneficiarios que le sucedan en sus derechos patrimoniales; y,
- g) Los demás que dispongan los Estatutos.

Artículo 77

Cada cooperativista tendrá derecho a un voto, cualquiera que sea el monto de sus aportaciones.

Artículo 78

Ninguna cooperativa podrá imponer condiciones discriminatorias de naturaleza alguna para el ingreso o retiro de sus cooperativistas. Sin embargo en interés de la estabilidad de la cooperativa, en los Estatutos se podrán incluir de modo general y no en casos

individuales, exigencias específicas que sean necesarias para la mejor realización de los fines que aquélla persigue.

Artículo 79

La persona que adquiriera la calidad de cooperativista responderá, como las demás, de las obligaciones contrarias por la cooperativa antes de su ingreso a la misma. Será nula toda disposición en contrario.

Artículo 80

La calidad de cooperativista se pierde por:

- a) Fallecimiento del cooperativista pérdida de la personalidad jurídica de la institución afiliada;
- b) Por liquidación de la cooperativa;
- c) Por expulsión acordado en Asamblea General por las causas establecidas en los Estatutos; y,
- ch) Por renuncia escrita ante la Junta Directiva.

Artículo 81

Perdida la calidad de cooperativista, se liquidará la cuenta de éste acreditándosele las aportaciones, los intereses y los excedentes no pagados, se debitarán las obligaciones a su cargo y la parte proporcional de las pérdidas estimadas hasta la fecha de cierre del ejercicio anual en el cual ocurriere la cancelación.

El saldo neto resultante de la liquidación si lo hubiere, será pagado al ex-cooperativista o a sus beneficiarios o herederos, en los plazos previstos por los Estatutos. La entrega a los beneficiarios se hará sin sujetarse a los trámites de declaratoria de heredero. No habiendo beneficiarios, la entrega se hará a los herederos declarados en legal forma.

Si el ex-cooperativista resultare deudor, la cooperativa ejercerá sus derechos con arreglo a la Ley; en tal caso, la certificación de la liquidación del crédito lleva aparejada ejecución.

TITULO III

INTEGRACION COOPERATIVISTA

CAPITULO I

FUSION, INCORPORACION, TRANSFORMACION

Artículo 82

Se permite la fusión, la incorporación y la transformación de las cooperativas de conformidad con esta Ley.

Artículo 83

Hay fusión cuando dos o más cooperativas se unen formando otra cooperativa y extinguiéndose la personalidad jurídica de aquéllas.

Artículo 84

Hay incorporación cuando una cooperativa absorbe a otra u otras, conservando la incorporante su personalidad jurídica y extinguiéndose la de las incorporadas. En caso de incorporación si fuere necesario, podrán modificarse los Estatutos de la cooperativa incorporante.

Artículo 85

Una cooperativa sólo podrá transformarse en otra cooperativa.

Artículo 86

La fusión, incorporación o transformación de cooperativas, se inscribirá en el Registro Nacional de Cooperativas.

Artículo 87

Contra la fusión, incorporación o transformación de cooperativas podrá hacerse oposición dentro de tres meses contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas.

Transcurridos los tres meses a que alude el párrafo anterior, si no hubiere oposición, la fusión, incorporación o transformación, tendrá pleno efecto legal.

CAPITULO II INTEGRACION POR NIVELES

Artículo 88

De acuerdo al nivel de integración, la cooperativa podrá ser:

1. De Primer Grado:

- a) Cuando esté formada por personas naturales solamente, o por personas naturales y jurídicas sin fines de lucro, e iniciará su denominación con la palabra "cooperativa"; y,
- b) La formada por grupos u organismos locales establecidos en determinada región en cuyo llevarán en su denominación la frase "Cooperativa Regional".

2. De Segundo Grado:

Cuando esté formada por:

- a) Cooperativas de primer grado y de igual actividad principal. Iniciará su denominación social con la palabra "Federación";
- b) Cooperativas de primer grado y de diferente actividad principal. Iniciará su denominación social con la palabra "unión";
- c) Cooperativas de primer grado y de igual o diferente actividad principal. Iniciará su denominación social con la frase "Central de Cooperativas"; y,
- ch) Cooperativas de primer grado del sector agrícola reformado por la afiliación de estas con personas jurídicas sin fines de lucro, no cooperativas de acuerdo como se establezca en el Reglamento de esta Ley. Iniciará su denominación social con la frase "Cooperativa Agro-Industrial" o "Empresa Cooperativa Agro-Industrial".

3. De Tercer Grado:

Cuando esté constituida por cooperativas de segundo grado. Iniciará su denominación social con la palabra "Confederación" y no sólo habrá una en el país.

Artículo 89

Las cooperativas de segundo y tercer grado, dentro de los principios del cooperativismo establecidos en la presente Ley, podrán realizar cualquier actividad de carácter técnico, económico, comercial, administrativo, financiero y social en favor de las cooperativas que formen parte de ellas y de cooperativas no afiliadas.

CAPITULO III ORGANISMOS DE INTEGRACION Y AUXILIARES

Artículo 90

La Confederación Hondureña de Cooperativas es el organismo privado superior o representativo del Movimiento Cooperativo Hondureño.

Artículo 91

A la Confederación Hondureña de Cooperativas, compete la promoción y la organización de entidades auxiliares con funciones de financiamiento, previsión social y otras al servicio del Movimiento Cooperativo Nacional, así como el fortalecimiento de los servicios especializados que sostengan actualmente las Federaciones de Cooperativas.

Las funciones de investigación, educación, formación y complementación profesional de asesoría técnica administrativo-contable y de auditoría cooperativa, corresponderán dentro del Movimiento Cooperativista Nacional, a los organismos auxiliares que designe la Confederación, sin perjuicio de las atribuciones que esta Ley confiere al Organismo Rector del Cooperativismo.

Las entidades a que se refiere este Artículo operarán dentro de los lineamientos cooperativistas, con personalidad jurídica y Estatutos propios otorgados en la misma forma que los de las cooperativas, pero sin atender el número de personas necesarias para constituir una cooperativa.

Artículo 92

Los organismos de integración podrán actuar como órganos de conciliación en los conflictos que se susciten entre cooperativas y sus cooperativistas o entre cooperativas. En tales casos, cuando fracasare la conciliación, podrán las partes ejercer las acciones administrativas o judiciales correspondientes.

TITULO IV

INSTITUTO HONDUREÑO DE COOPERATIVAS

CAPITULO I

CREACION, FINES

Artículo 93

Como Organismo del Movimiento Cooperativista créase el Instituto Hondureño de Cooperativas como Institución descentralizada del Estado autónomo y con patrimonio propio que tendrá a su cargo en tal forma exclusiva, la organización del sector cooperativista de la economía, en el marco de los principios del cooperativismo y por ende, la formulación, dirección, planificación, coordinación y ejecución de la política del Estado en materia cooperativa. La sigla "IHDECOOP" identifica al Instituto Hondureño de Cooperativas.

Las relaciones de IHDECOOP con el Poder Ejecutivo se realizarán por medio de la Secretaría de Economía y Comercio.

Artículo 94

El Instituto Hondureño de Cooperativas (IHDECOOP), tendrá su domicilio en la ciudad de San Pablo Sula, departamento de Cortes y establecerá oficinas regionales en otras zonas del país par el cabal cumplimiento de sus objetivos y atribuciones.

Artículo 95

El IHDECOOP tendrá los objetivos siguientes:

- a) Fomentar el desarrollo, consolidación e integración del cooperativismo y defender sus instituciones;
- b) Desarrollar programas para el fomento del cooperativismo y coordinar los proyectos de la misma naturaleza, o similares, que se establezcan con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras o internacionales; y,
- c) Velar porque los planes nacionales de desarrollo se ejecuten sobre bases cooperativistas.

Artículo 96

Son atribuciones del IHDECOOP, las siguientes:

- a) Promover la constitución y organización de cooperativas y capacitar sus recursos humanos;
- b) Aprobar la constitución, la disolución y la liquidación de cooperativas;
- c) Asesorar en coordinación con organismos del Movimiento Cooperativo a las cooperativas en materia de organización técnico-administrativo, contable, legal y desarrollo;
- ch) Llevar el Registro Nacional de Cooperativas;
- d) Representar al Estado en reuniones nacionales e internacionales sobre cooperativismo;
- e) Identificar, contratar y desarrollar programas y proyectos de asistencia técnica, y económica tanto con entidades nacionales, como extranjeras o internacionales, públicas o privadas, que benefician al sector cooperativista; por su propia iniciativa o excitativa el Movimiento Cooperativo;
- f) Apoyar a los organismos del Movimiento Cooperativo en la captación de planes y recursos y desarrollo de programas;
- g) Llevar y mantener actualizada la información estadística del Movimiento Cooperativo;
- h) Fiscalizar el movimiento contable legal y económico de las cooperativas para la eficacia de su control y administración;
- i) Coordinar la asistencia técnica que puedan prestar los organismos del Estado, las instituciones de derecho público, las agencias internacionales o regionales y las personas de derecho privado en materia de organización de cooperativas, funcionamiento técnico y administrativo, contable, legal y de desarrollo;
- j) Imponer las sanciones a que se refiere el Artículo 63 de esta Ley; y,
- k) Realizar cualesquiera otros actos y operaciones compatibles con su naturaleza y finalidad, y con los objetivos de la Ley.

Artículo 97

La inspección y vigilancia de las cooperativas serán ejercidas por el Estado a través de IHDECOOP, pudiendo delegar esas funciones en los organismos de integración o auxiliares especializados del sector cooperativo. Las resoluciones que se emitan como resultado de la fiscalización, una vez firmes tendrán fuerza ejecutiva.

Artículo 98

El Instituto Hondureño de Cooperativas (IHDECOOP), podrá intervenir temporalmente la administración de una cooperativa. La intervención temporal del IHDECOOP será ejercida previa autorización de la Junta Directiva de IHDECOOP.

El Reglamento de esta Ley establecerá las formas y los procedimientos a seguir para la aplicación de este Artículo.

CAPITULO II ADMINISTRACION

Artículo 99

Los órganos de dirección y administración del Instituto Hondureño de Cooperativas son: la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva.

Artículo 100

La Junta Directiva del IHDECOOP estará integrada por:

- a) El Secretario de Estado en los Despachos de Economía y Comercio, o el Subsecretario del ramo, quien lo presidirá;
- b) El Secretario de Estado en los Despachos de Hacienda y Crédito Público o su representante;
- c) El Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales o su representante;
- ch) El Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario, o su representante;
- d) Cuatro representantes de Movimiento Cooperativista electos por dos años por la Asamblea General de la Confederación Hondureña de Cooperativas quienes tendrán sus respectivos suplentes.

Artículo 101

Las decisiones de la Junta Directiva del IHDECOOP se tomarán por simple mayoría de votos.

Se repetirá la votación en caso de empate, y de subsistir éste, la decisión se adoptará por el voto de calidad del Presidente.

Artículo 102

No podrán ser miembros de la Junta Directiva del IHDECOOP en representación del Movimiento Cooperativo:

- a) Los no afiliados a ninguna cooperativa;
- b) Los que sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad entre sí o con el Director Ejecutivo del Instituto;
- c) Los que pertenezcan a una misma cooperativa;
- ch) Los fallidos y quebrados, no rehabilitados así como los que tengan pendientes procedimientos de quiebra;
- d) Los legalmente incapaces;
- e) Los deudores, morosos para con el Estado y organizaciones cooperativas; y,
- f) Los Directivos de Cooperativas, cuando éstos estuvieran en proceso de quiebra o disolución.

Artículo 103

La administración general del IHDECOOP, estará a cargo de un Director Ejecutivo nombrado por la Junta Directiva.

Artículo 104

El Director Ejecutivo deberá ser persona de reconocida solvencia, moral, experiencia, capacidad y eficacia en materia de cooperativismo. Su período de funciones será de cuatro años.

**CAPITULO III
PATRIMONIO****Artículo 105**

El Patrimonio de IHDECOOP estará constituido por los siguientes elementos:

- a) Los bienes que se le transfieran por disposición de esta Ley;

- b) El producto de los servicios remunerados que preste y de las multas pecuniarias que imponga;
- c) Los bienes que le transfiera el Estado y otras personas naturales o jurídicas nacionales, extranjeras o internacionales; y,
- ch) El producto del timbre cooperativo y los bonos u otras obligaciones que se emitan conforme con la Ley.

Artículo 106

Al IHDECOOP, se transferirán los fondos que para promoción, desarrollo y consolidación del cooperativismo se asigne en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

Artículo 107

Se autoriza la emisión del Timbre Cooperativo. La emisión se hará bajo la responsabilidad y control del Instituto Hondureño de Cooperativas; su aplicación se sujetará a las disposiciones del Reglamento de esta Ley.

CAPITULO IV

REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS

Artículo 108

El Registro Nacional de Cooperativas, dependerá del Instituto Hondureño de Cooperativas y estará a cargo de un profesional del Derecho, debidamente colegiado y con conocimientos en materia del cooperativismo y registrar.

Artículo 109

En el Registro Nacional de Cooperativas se llevarán los libros siguientes:

- a) Libro Diario de Presentación de Documentos;
- b) Libro de Inscripción de Cooperativas;
- c) Libros de Inscripción de Documentos; y,
- ch) Los demás que establezca el Reglamento.

Artículo 110

En el Registro Nacional de Cooperativas, se inscribirán entre otros hechos y relaciones jurídicas, las siguientes:

- a) El nombramiento de la Junta Directiva, Gerentes y órganos de vigilancia o fiscalización;
- b) La emisión de bonos u otras obligaciones;
- c) Las Actas de Constitución y Estatutos de Cooperativas y sus reformas;
- ch) La transformación, incorporación, fusión, disolución y liquidación de cooperativas; y,
- d) Otros hechos o relaciones jurídicas que disponga el Reglamento respectivo.

Artículo 111

Los documentos provenientes del extranjero se legalizarán previamente para su inscripción.

Artículo 112

El Registro Nacional de Cooperativas es público. El Registrador certificará a quien lo solicite, los datos que aparezcan en la inscripción correspondiente.

Artículo 113

Podrá solicitarse anotación preventiva del hecho o del derecho que se alegare como contradictorio en el registro. Toda inscripción posterior será ineficaz en cuanto perjudique el derecho que ampare la anotación.

Artículo 114

Los asientos del Registro sólo podrán cancelarse:

- a) Por consentimiento expreso de los interesados;
- b) Cuando la cancelación sea consecuencia natural del acto jurídico que se inscriba; y,
- c) Por decisión judicial.

TITULO V

RECURSOS CONTRA PROVIDENCIAS Y RESOLUCIONES

Artículo 115

Las resoluciones pronunciadas por la Asamblea General de una Cooperativa, serán recurribles en apelación ante el Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Cooperativas; dicho recurso deberá interponerse dentro del plazo de 10 días más el término de la instancia en su caso.

Artículo 116

En las providencias que pronuncie el Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Cooperativas podrán interponerse los recursos de reposición y de apelación debiendo este último sustanciarse ante la Junta Directiva del IHDECOOP.

Los términos para la reposición serán de tres (3) días y para la apelación serán de diez (10) días.

Artículo 117

Contra las resoluciones definitivas pronunciadas por el Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Cooperativas, en primera instancia, podrá interponerse el recurso de apelación ante la Junta Directiva del IHDECOOP. Dentro del término de diez (10) días contra las resoluciones dictadas en segunda instancia por IHDECOOP, no cabrá recurso ordinario alguno.

Artículo 118

En las resoluciones definitivas pronunciadas por el Director Ejecutivo o por la Junta Directiva del IHDECOOP, podrán interponerse los recursos y acciones legales correspondientes.

Artículo 119

En la tramitación de los recursos se seguirán los procedimientos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley; a falta de ellos se aplicará el Código de Procedimientos Administrativos.

TITULO VI

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 120

La cooperativa puede aumentar o disminuir su haber social; el aumento por revalorización del patrimonio es lícito, pero su importe constituirá una reserva de la que no podrá disponer la cooperativa sino cuando se enajenen los bienes revalorados y se perciba en efectivo el importe de su plusvalía.

Artículo 121

El embargo practicado por acreedores particulares de los cooperativistas sobre las aportaciones de éstos, afectará únicamente los excedentes y el importe que resulte cuando sea liquidada la cooperativa o cuando se liquiden las aportaciones por exclusión o retiro del cooperativista embargado.

Artículo 122

La sentencia que se pronuncie contra la cooperativa condenándola al cumplimiento de obligaciones respecto de terceros, tendrá fuerza de cosa juzgada contra los cooperativistas en el límite de sus responsabilidades.

Artículo 123

Los títulos valores que se originen en actos cooperativos deberán reunir los requisitos mencionados en el Código de Comercio.

Artículo 124

Las cooperativas con conocimiento del afiliado pueden retener aportaciones, depósitos y cualesquiera otros valores de los cooperativistas y con los valores retenidos cubrir obligaciones del afiliado con la cooperativa.

Artículo 125

Las aportaciones, depósitos, participaciones y derechos de cualquier clase que correspondan a los cooperativistas quedan sujetos preferentemente a favor de las cooperativistas por las obligaciones que aquéllos hayan contraído con éstas.

Artículo 126

Los casos no previstos en esta Ley, en su Reglamento o en los Estatutos de la correspondiente Cooperativa, se resolverán de acuerdo con los principios cooperativistas derivados de la misma Ley; en su defecto, de acuerdo con los principios del Derecho Cooperativo generalmente admitidos y finalmente por las regulaciones del Código de Comercio en primer lugar y del Crédito Civil en segundo que por su naturaleza y similitud, puedan ser aplicadas a las cooperativas.

Artículo 127

Los derechos y acciones de los cooperativistas contenidos en esta Ley o sus Reglamentos prescribirán en el término de seis meses contados desde la fecha en que pudieran hacerse efectivos, a menos que tuvieran señalado otro plazo especial de prescripción en forma expresa.

Artículo 128

La acción de la autoridad para imponer las sanciones previstas en esta Ley prescribirá a los seis meses contados desde que ésta tuvo conocimiento de la infracción.

Artículo 129

El Instituto Hondureño de Cooperativas, está exento del pago de toda clase de impuestos sobre bienes, operaciones y rentas, así como del uso del papel sellado y timbres de contratación o registros, y gozará libre registro de derechos aduanales, consulares y otros que graven las importaciones y sobre ventas, con excepción de los servicios del Estado.

Artículo 130

Queda derogada la Ley de Asociaciones Cooperativistas contenidas en el Decreto N° 158 emitido por el Congreso Nacional el 13 de marzo de 1954 y todas las leyes, reglamentos y disposiciones de cualquier orden relativo a la organización, funcionamiento, fiscalización y existencia de cooperativas de cualquier tipo y de sus organismos auxiliares.

No obstante lo anterior los planes cooperativos de los Sindicatos de Trabajadores, constituidos dentro de los principios del cooperativismo, continuarán rigiéndose por lo establecido en el Código de Trabajo, sus Reglamentos y Estatutos, pero podrán solicitar cuando así lo estimen conveniente la Asesoría del Instituto Hondureño de Cooperativas y mantener relaciones con los organismos de integración del Movimiento Cooperativo.

Artículo 131

Las normas administrativas sobre cooperativas dictadas hasta la fecha de promulgación de esta Ley subsistirán en tanto no se dicten los respectivos reglamentos y no se opongan a esta Ley.

Artículo 132

Mientras se crea el organismo financiero del cooperativismo, sus funciones podrán ser asumida convencionalmente por una o varias Federaciones de Cooperativas.

Artículo 133

En el caso a que se refiere el Artículo anterior, las Federaciones y Cooperativas que requieren servicios financieros deberán participar en los planes de capitalización de las Federaciones que los brinden.

Artículo 134

Los planes de capitalización de entidad financiera y los términos para la prestación de servicios financieros deberán ser consultados a la Confederación Hondureña de Cooperativas y a IHDECOOP.

Artículo 135

Las organizaciones a que se refiere esta Ley, deberán ajustar sus Estatutos, su estructura y su funcionamiento a las disposiciones de la misma dentro del plazo de un año, contado a partir de la publicación legal de su Reglamento, las organizaciones que después de ese plazo no hubieren cumplido con este requisito, quedarán sujetas a disolución; sin embargo, en casos específicos, a solicitud de parte interesada, IHDECOOP podrá conceder una prórroga que no excederá de seis meses.

Artículo 136

Se transferirán a IHDECOOP, todos los fondos que para promoción, desarrollo y consolidación del cooperativismo se hayan asignado a otras entidades. En el Reglamento de esta Ley se regularán las modalidades y circunstancias para la transferencia y asignaciones a que se refiere este Artículo.

Artículo 137

Las entidades centralizadas y descentralizadas del Estado, podrán traspasar a IHDECOOP los proyectos de origen nacional o internacional que tengan relación con cooperativas y que están ejecutándose al entrar en vigencia esta Ley.

Artículo 138

Mientras se emite el Reglamento a que se refiere el Artículo 56, para la concesión de las exoneraciones se continuarán aplicando los procedimientos actualmente en vigencia.

Artículo 139

Los activos y pasivos y en general, los derechos y obligaciones de la Dirección de Fomento Cooperativo, pasarán a formar parte de pleno derecho, del patrimonio del Instituto Hondureño de Cooperativas.

En lo que respecta al personal laborante en la Dirección de Fomento Cooperativo, se le liquidarán las prestaciones laborales a que tenga derecho, a cuyo efecto el Poder Ejecutivo asignará los fondos necesarios afectando la partida correspondiente.

Artículo 140

Treinta días, después de la vigencia de esta Ley, el Instituto Hondureño de Cooperativas entrará en funcionamiento, desapareciendo la Dirección de Fomento Cooperativo. A este efecto, facúltase al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría del Estado en los Despachos de Economía y Comercio, proceda dentro del término antes indicado a convocar a la Junta Directiva del IHDECOOP, para que tome las medidas correspondientes a su funcionamiento.

Artículo 141

El IHDECOOP, en la contratación de su personal dará preferencia al que haya laborado en la Dirección de Fomento Cooperativo, previa evaluación del mismo y siempre que reúna los requisitos establecidos por la Junta Directiva para el puesto de trabajo.

Artículo 142

La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial "LA GACETA".

4.22. ITALIA**Il Codice Civile Italiano****LIBRO PRIMO****DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA****CAPO II****Delle associazioni e delle fondazioni****Art. 14 Atto costitutivo**

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico (1350, 2643).

La fondazione può essere disposta anche con testamento (600).

Art. 15 Revoca dell'atto costitutivo della fondazione

L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

Art. 16 Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sulla

amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione (28).

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'**art. 12 (att. 4)**.

Art. 17 Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati

La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa (473, 782; att. 5-7).

Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.

Art. 18 Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato (1710 e seguenti). E' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso (2392).

Art. 19 Limitazioni del potere di rappresentanza

Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'**art. 33**, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza (1353, 2298, 2384).

Art. 20 Convocazione dell'assemblea delle associazioni

L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale (att. 8).

Art. 21 Deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (11).

Art. 22 Azioni di responsabilità contro gli amministratori

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori (2941).

Art. 23 Annullamento e sospensione delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).

Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che l'ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori (att. 10).

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa (att. 9).

Art. 24 Recesso ed esclusione degli associati

La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 25 Controllo sull'amministrazione delle fondazioni

L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Art. 26 Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione

L'autorità governativa può disporre il coordinamento della attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

Art. 27 Estinzione della persona giuridica

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio (att. 10).

Art. 28 Trasformazione delle fondazioni

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'**art. 26** non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate (att. 10).

Art. 29 Divieto di nuove operazioni

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale (1292).

Art. 30 Liquidazione

Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice (att. 11-21).

Art. 31 Devoluzione dei beni

I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro crédito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno della chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto (2964 e seguenti).

Art. 32 Devoluzione dei beni con destinazione particolare

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi.

Art. 33 Registrazione delle persone giuridiche

In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche (att. 22 e seguenti).

Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo, quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata

determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.

Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte (1292).

Art. 34 Registrazione di atti

Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.

Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Art. 35 Disposizione penale

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli artt. 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice (att. 25 e seguenti) sono puniti con l'ammenda da L. 20.000 a L. 1.000.000.

CAPO III Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78).

Art. 37 Fondo comune

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

Art. 38 Obbligazioni

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (Cod. Proc. Civ. 19).

Art. 39 Comitati

I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

Art. 40 Responsabilità degli organizzatori

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Art. 41 Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica (12), i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte.

I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

Il comitato può stare in giudizio nella persona del Presidente (Cod. Proc. Civ. 75).

Art. 42 Diversa destinazione dei fondi

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.

- **Legge 11 agosto 1991, n. 266**

"Legge-quadro sul volontariato"

(Pubblicata in G.U. 22 agosto 1991, n. 196)

1. Finalità e oggetto della legge. - 1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

2. Attività di volontariato. - 1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

3. Organizzazioni di volontariato. - 1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

4. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato. - 1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

5. Risorse economiche. - 1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

- 4.** In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
- 6.** Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome. - **1.** Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
- 2.** L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
- 3.** Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che allegghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
- 4.** Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
- 5.** Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
- 6.** Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.
- 7.** Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
- 7. Convenzioni. - 1.** Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
- 2.** Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
- 3.** La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

8. Agevolazioni fiscali. - 1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3. (1).

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali (2)

(1) Aggiunge il comma 1-ter all'art. 17, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 che, quindi recita:

"1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli artt. 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni"

(2) Frase così modificata dall'art. 18, del Decreto Legge 29 aprile 1994, n. 260.

Si ricorda, inoltre, che con D.M. 25 maggio 1995, sono stati fissati i criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato.

9. Valutazione dell'imponibile. - 1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.

10. Norme regionali e delle province autonome. - 1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano:

- a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;
- b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
- c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
- d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
- e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;
- f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

11. Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi. - 1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

12. Osservatorio nazionale per il volontariato. - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

- a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
- b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
- c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
- d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
- e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
- f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
- g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;

h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

13. Limiti di applicabilità. - 1. E' fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

14. Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria. - 1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

15. Fondi speciali presso le regioni. - 1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

16. Norme transitorie e finali. - 1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

17. Flessibilità nell'orario di lavoro. - 1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

• **Legge 8 novembre 1991, n. 381**

"Disciplina delle cooperative sociali"

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1991, n. 283)

1. Definizione. - 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".

2. Soci volontari. - 1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le

prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

3. Obblighi e divieti. - 1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.

2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.

3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.

4. Persone svantaggiate. - 1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.

5. Convenzioni. -1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali. **4.** Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto. (1)

6 - Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 - 1. Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, è aggiunto in fine, il seguente comma:

"Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";

b) all'articolo 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale".

c) al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione cooperazione sociale".

d) all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta".

7. Regime tributario. - 1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

"41 bis - prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale, o in comunità e simili, o ovunque rese, in favore degli anziani ed anabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale" (2)

(2) così modificato dalla L., 22 marzo 1995 n. 85

8. Consorzi. - 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

9. Normativa regionale. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.

2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.

3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

10. Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza. - 1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

11. Partecipazione delle persone giuridiche. - 1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

12. Disciplina transitoria. - 1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.

2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

- **Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460**

"Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale."

(Pubblicato in G. U. 2 gennaio 1998, n. 1, S.O.)

(Nota bene: si consiglia la lettura della)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997;

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative recate dal citato articolo della legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996, recante proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della medesima legge n. 662 del 1996;

Acquisito il parere della summenzionata Commissione parlamentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Sezione

Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto

Articolo 1. Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l'oggetto esclusivo o principale di attività. - 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 87, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.»

Articolo 2. Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività. - 1. Nell'articolo 108, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, è aggiuntivo, in fine, il seguente:

«2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:

a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.»

2. Le attività indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale

Articolo 3. Determinazione dei redditi e contabilità separata. - 1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.

3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.»

b) il comma 4 bis è sostituito dal seguente

«4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.»

Articolo 4. Regime forfettario di determinazione del reddito. - 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 109 è inserito il seguente:

«Articolo 109-bis (Regime forfettario degli enti non commerciali) - 1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfettaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:

a)attività di prestazioni di servizi:

1)fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;

2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;

b)altre-attività:

1)fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;

2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.

2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi

3. Il regime forfettario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.

4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni

Articolo 5. Enti di tipo associativo. - 1. All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'attività svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.»

b) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi simili e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.»

2. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'esercizio di imprese ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati da enti di tipo associativo, le parole «e sportive» sono sostituite dalle seguenti: «sportive, dilettantistiche, di promozione sociale e dei formazione extra-scolastica della persona»; nello stesso comma l'ultimo periodo è soppresso;

b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le parole «e sportive» sono sostituite dalle seguenti: «sportive, dilettantistiche, di promozione sociale e dei formazione extra-scolastica della persona»;

c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.

Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni

dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.»

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le associazioni costituite prima della predetta data predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 111, comma 4- quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dal comma 1, lettera b), ed ai sensi dell'articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come modificato dal comma 2, lettera b).

4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di cui al comma 3 è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 6. Perdita della qualifica di ente non commerciale. - 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111, è inserito il seguente:

«Articolo 111-bis (Perdita della qualifica di ente non commerciale) - 1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.

2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:

a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.»

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, all'articolo 4, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

«Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.»

Articolo 7. Enti non commerciali non residenti. - 1. All'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, al comma 2, le parole «senza tenerne contabilità separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 109» sono sostituite dalle seguenti «si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3 bis dell'articolo 109.»

Articolo 8. Scritture contabili degli enti non commerciali. - 1. Nell'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma, sono aggiunti, alla fine, i seguenti:

«Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Gli enti soggetti alla determinazione forfettaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»

Articolo 9. Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali. - 1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998, è esente dalle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, sull'incremento di valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento, né costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario, a condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora il trasferimento abbia a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore cedente, questi ha l'obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d'imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta

locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , e della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991 ; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.

2. L'ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , può, entro il 30 settembre 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo, determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell'ente stesso non acquistato nell'esercizio di impresa indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.

Sezione

II

Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Articolo 10. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. - 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

- 1)assistenza-sociale-e-socio-sanitaria;
- 2)assistenza-sanitaria;
- 3)beneficenza;
- 4)istruzione;
- 5)formazione;
- 6)sport-dilettantistico;
- 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla

legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 , e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239 , convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 , iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 . Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991 , n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991 .

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 , le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , introdotto dall'articolo 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 , i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria

Articolo 11. Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni. - 1. E' istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 , i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS (35/a).

2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.

Articolo 12. Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi. - 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto, è inserito il seguente:

«Articolo 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) - 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.

2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.»

Articolo 13. Erogazioni liberali. - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, relativo alle detrazioni dell'imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta, in fine, la seguente: «i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»

2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in campo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i)» sono sostituite con le seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i-bis)»;

b) nell'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;

c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.»;

c) nell'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13- bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13- bis»;

d) nell'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13- bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis del comma 1 dell'articolo 13- bis»;

e) nell'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13- bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis del comma 1 dell'articolo 13- bis».

2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo unico.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.

5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 , prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico

6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2.

7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 114, comma 2-

bis, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114.

Articolo 14. Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto. - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazione di servizi, dopo le parole: «solidarietà sociale,» sono inserite le seguenti: «nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),»;

b) all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel numero 12), dopo le parole «studio o ricerca scientifica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e alle ONLUS»;

2) nel numero 15), dopo le parole: «effettuate da imprese autorizzate» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e da ONLUS»;

3) nel numero 19), dopo le parole: «società di mutuo soccorso con personalità giuridica» sono inserite le seguenti: «e da ONLUS»;

4) nel numero 20), dopo le parole: «rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e da ONLUS»;

5) nel numero 27-ter), dopo le parole: «o da enti aventi finalità di assistenza sociale» sono inserite le seguenti: «e da ONLUS»;

c) nell'articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo comma, le parole: «di cui all'articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-bis».

Articolo 15. Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. -

1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , le ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

Articolo 16. Disposizioni in materia di ritenute alla fonte. - 1. Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .

2. Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , corrisposti alle ONLUS, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 , recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

Articolo 17. Esenzioni dall'imposta di bollo. - 1. Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).».

Articolo 18. Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative. - 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (Esenzioni). - 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.».

Articolo 19. Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni. - 1. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo le parole: «altre finalità di pubblica utilità» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)».

Articolo 20. Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva. - 1. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole: «pubblica utilità», sono inserite le seguenti: «, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)».

2. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Articolo 21. Esenzioni in materia di tributi locali. - 1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Articolo 22. Agevolazioni in materia di imposta di registro. - 1. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il settimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater): lire 250.000.»; nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter), è aggiunta, in fine, la seguente: «II-quater). A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.»;

b) dopo l'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente: «Art. 11-bis - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.».

Articolo 23. Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli. - 1. L'imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle ONLUS nonché dagli enti associativi di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.

Articolo 24. Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza. - 1. Nell'articolo 40, primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole: «enti morali,» sono inserite le seguenti: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),»;

b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le parole: «enti morali,» è inserita la seguente: «ONLUS,»;

c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole: «enti morali,» è inserita la seguente: «ONLUS,».

Articolo 25. Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. - 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). - 1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:

a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22;

b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18; nell'ipotesi di cui all'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.

3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.

4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.

5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.».

2. Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle attività richiamate allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a).

Articolo 26. Norma di rinvio. - 1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.

Articolo 27. Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale. - 1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «organizzazione non lucrativa di utilità sociale», ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle ONLUS.

Articolo 28. Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori. - 1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:

a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;

b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all'articolo 11, comma 1;

c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.

2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS.

3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.

Articolo 29. Titoli di solidarietà. - 1. Per l'emissione di titoli da denominarsi «di solidarietà» è riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle ONLUS.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 30. Entrata in vigore. - 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.

• **Legge 7 dicembre 2000, n. 383**

"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità e oggetto della legge)

1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Associazioni di promozione sociale)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 3.

(Atto costitutivo e statuto)

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;

- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 4.

(Risorse economiche)

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonchè, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.

Art. 5.

(Donazioni ed eredità)

1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

Art. 6.

(Rappresentanza)

1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.

2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Capo II

REGISTRI E OSSERVATORI DELL'ASSOCIAZIONISMO

Sezione I

Registri nazionale, regionali e provinciali

Art. 7.

(Registri)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il

diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

Art. 8.

(Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali)

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri di cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonché la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11.

3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.

4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.

Art. 9.

(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)

1. Nei registri di cui all'articolo 7 devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività.

2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

Art. 10.

(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)

1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14.

2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.

Sezione II

Osservatorio nazionale e osservatori regionali dell'associazionismo

Art. 11.

(Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.

2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.

3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.

4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.

5. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.

7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

Art. 12.

(Funzionamento e attribuzioni)

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall'insediamento.

2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate all'Osservatorio e i rapporti tra l'Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.

3. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:

a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale;

b) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero;

c) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull'associazionismo;

d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;

e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell'associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;

f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;

h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull'associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;

i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.

Art. 13.

(Fondo per l'associazionismo)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell'articolo 12.

2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.

Art. 14.

(Osservatori regionali)

1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all'articolo 8, comma 2.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.

3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 15.

(Collaborazione dell'ISTAT)

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all'Osservatorio adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.

Art. 16.

(Rapporti con l'Osservatorio nazionale per il volontariato)

1. L'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.

2. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta all'anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato.

3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.

Art. 17

(Partecipazione alla composizione del CNEL)

1. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.

2. L'alinnea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: «Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:».

3. All'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), è inserito il seguente:

«1-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;».

4. All'articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri».

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.

Capo III

PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI

Sezione I

Prestazioni degli associati

Art. 18.

(Prestazioni degli associati)

1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 19.

(Flessibilità nell'orario di lavoro)

1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Sezione II

Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni

Art. 20.

(Prestazioni in favore dei familiari degli associati)

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.

Art. 21.

(Imposta sugli intrattenimenti)

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.

Art. 22.

(Erogazioni liberali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 13-bis:
- 1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera *i-ter*) è aggiunta la seguente:
- «*i-quater*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera *i-bis*)»;
- 2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*) ed *i-bis*)» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*), *i-bis*) e *i-quater*)»;
- b) all'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera *c-septies*) è aggiunta la seguente:
- «*c-octies*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge»;
- c) all'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: «oneri indicati alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*) ed *i-bis*) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*), *i-bis*) e *i-quater*) del comma 1 dell'articolo 13-bis»;
- d) all'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*) ed *i-bis*) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*), *i-bis*) e *i-quater*) del comma 1 dell'articolo 13-bis»;
- e) all'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*) ed *i-bis*) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*), *i-bis*) e *i-quater*) del comma 1 dell'articolo 13-bis».

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.

Art. 23.

(Tributi locali)

1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.

Art. 24.

(Accesso al credito agevolato e privilegi)

1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 30, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali.

2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice civile.

3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.

Art. 25.

(Messaggi di utilità sociale)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio.

2. All'articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,» sono inserite le seguenti: «alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,».

Art. 26.

(Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi)

1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.

Art. 27.

(Tutela degli interessi sociali e collettivi)

1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:

a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;

b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;

c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).

2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 28.

(Accesso al Fondo sociale europeo)

1. Il Governo, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l'accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonchè, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare l'accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.

Art. 29.

(Norme regionali e delle province autonome)

1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

Art. 30.

(Convenzioni)

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonchè le modalità di rimborso delle spese.

3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.

4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.

5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)

1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.

2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.

3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.

Art. 32.

(Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

«*b-bis*) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;».

3. All'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «senza fini di lucro,» sono inserite le seguenti: «nonchè ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,». Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro,

di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 33.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l'anno 2000, di lire 98.962 milioni per l'anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2000, lire 90.762 milioni per l'anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l'anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- Legge 8 novembre 2000, n. 328

"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 186

Capo I

PRINCÌPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 1.

(Principi generali e finalità)

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

Art. 2.

(Diritto alle prestazioni).

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti

all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18.

5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

Art. 3.

(Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.

4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 4.

(Sistema di finanziamento delle politiche sociali).

1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.

3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132.

4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.

5. Ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

Art. 5.

(Ruolo del terzo settore).

1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo

settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

>tj;2> 2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

3. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.

4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

Capo II

ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 6.

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);

d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);

e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);

d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

Art. 7.

(Funzioni delle province)

1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:

a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;

b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;

d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

Art. 8.

(Funzioni delle regioni)

1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419.

2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.

3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;

b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;

d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5;

g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;

i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;

l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);

m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.

4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.

5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.

Art. 9.

(Funzioni dello Stato)

1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:

a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18;

b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia, all'interno del settore penale;

c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;

d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;

e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 7.

2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 10.

(Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b);

b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica;

c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b):

1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia;

2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permuta, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;

d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regola la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;

e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;

f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);

g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore,

prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;

i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

Art. 11.

(Autorizzazione e accreditamento)

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni.

3. I comuni provvedono all'accREDITAMENTO, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n).

4. Le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.

Art. 12.

(Figure professionali sociali)

1. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili professionali delle figure professionali sociali.

2. Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare di concerto con i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:

a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione;

c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a), sono definiti dall'università ai sensi dell'articolo 11 del citato regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.

5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarietà sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per le figure professionali sociali, le modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività formative negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Art. 13.

(Carta dei servizi sociali)

1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.

2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

3. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.

Capo III

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE

Art. 14.

(Progetti individuali per le persone disabili)

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta

dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

Art. 15.

(Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti)

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.

Art. 16.

(Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le

famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivi, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.

3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:

a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia;

b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;

d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;

e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;

f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.

Art. 17.

(Titoli per l'acquisto di servizi sociali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.

Capo IV

STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 18.

(Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali)

1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato "Piano nazionale", tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4 nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.

2. Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni

di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Il Piano nazionale indica:

a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22;

b) le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica;

c) le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;

e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;

f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonché gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali;

g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3;

i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'articolo 16, comma 4, e dei titoli di cui all'articolo 17;

l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'articolo 14;

m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;

n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;

o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcolodipendenti.

4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione dà conto altresì dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.

Art. 19.

(Piano di zona)

1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;

b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);

c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;

d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;

g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

Art. 20.

(Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002,

l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;

b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a);

c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;

d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;

e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.

7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i

Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24.

8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 24 della presente legge.

9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.

10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.

11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.

Art. 21.

(Sistema informativo dei servizi sociali)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà sociale. I componenti della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite

massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, definisce le modalità e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello locale.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.

Capo V

INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 22.

(Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

- a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
- b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
- e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
- f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
- g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;
- h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
- i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3,

lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) assistenza domiciliare;
- d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Sezione II

Misure di contrasto alla povertà e riordino degli emolumenti economici assistenziali

Art. 23.

(Reddito minimo di inserimento)

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è sostituito dal seguente:

"Art. 15. – *(Estensione del reddito minimo di inserimento)*. – 1. Il Governo, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riferisce al Parlamento, entro il 30 maggio 2001, sull'attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti. Con successivo provvedimento legislativo, tenuto conto dei risultati della sperimentazione, sono definiti le modalità, i termini e le risorse per l'estensione dell'istituto del reddito minimo di inserimento come misura generale di contrasto della povertà, alla quale ricondurre anche gli altri interventi di sostegno del reddito, quali gli assegni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni".

2. Il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è definito quale misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito nell'ambito di quelle indicate all'articolo 22, comma 2, lettera a), della presente legge.

Art. 24.

(Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità

spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma. La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di *handicap*, per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:

1) reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilità, è cumulabile con l'indennità di cui al numero 3.1) della presente lettera;

2) reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;

3) indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravità, nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennità afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilità, totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilità grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennità può essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro non cumulabili:

3.1) indennità per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;

3.2) indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;

b) cumulabilità dell'indennità di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23;

c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;

e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che già fruiscono di assegni e indennità;

g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23, a diretto beneficio dell'assistito;

h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed *handicap* – *International classification of impairments, disabilities and handicaps* (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

Art. 25.

(Accertamento della condizione economica del richiedente)

1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Art. 26.

(Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali)

1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

(Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale)

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.

4. La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250

milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Art. 28.

(Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema)

1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale nonché le IPAB possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 29.

(Disposizioni sul personale)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonché in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalità di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

Art. 30.

(Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.

Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche
D.P.R. 10.02.2000 n° 361 , G.U. 07.12.2000

• DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 2000, n.361

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

(Gazzetta Ufficiale n. 286 del 07-12-2000)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 17, e successive modificazioni;

Viste le norme del titolo II, capi I e II, del codice civile;

Viste le norme del capo I, sezione I, delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dall'adunanza generale l'11 marzo 1999 e dalla sezione consultiva per gli affari normativi il 30 agosto 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 ottobre 1999 e del 4 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'interno, della giustizia e per i beni e le attività culturali;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.
2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.
3. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.
5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.
6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento puo' essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.

8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.

10. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.

Art. 2.

Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo

1. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalita' e nei termini previsti per l'acquisto della personalita' giuridica dall'articolo 1, salvo i casi di riconoscimento della personalita' giuridica per atto legislativo.

2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21, secondo comma, del codice civile.

3. Per le fondazioni, alla domanda e' allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.

Art. 3.

Registro delle persone giuridiche

1. Il registro di cui all'articolo 1, comma 1, consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.

2. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.

3. L'iscrizione e' contrassegnata da un numero d'ordine ed e' accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Alla fine della parte generale il registro e' munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa e' iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro .

4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nell'articolo 4.

5. Ad ogni persona giuridica e' riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato ad una persona giuridica e' esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.

6. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal prefetto ovvero da un funzionario da questi delegato con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell'ultima pagina il prefetto indica il numero dei fogli di cui e' composto il registro.

7. Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'articolo 4, comma 2, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere. Tali copie restano depositate in prefettura e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.

8. Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta. La prefettura deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

9. Agli adempimenti di cui al presente regolamento e' data attuazione, ove possibile, mediante l'utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti.

Art. 4.

Iscrizioni nel registro

1. Nel registro devono essere indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza.

2. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione e' espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Art. 5.

Decentramento amministrativo

1. Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalle province autonome competenti.

Art. 6.

Estinzione della persona giuridica

1. La prefettura, la regione ovvero la provincia autonoma competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile e da comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.

Art. 7.

Competenze delle regioni e delle province autonome

1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalita' statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, e' determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le regioni a statuto ordinario istituiscono il registro delle persone giuridiche di cui al comma 1. Fino a quando non abbiano provveduto, le regioni applicano le norme del presente regolamento.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti.

Art. 8.

Coordinamento con il codice civile e con le norme di attuazione

1. I richiami a norme abrogate dal presente regolamento contenuti nel codice civile e nelle leggi speciali s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento medesimo. Ogni riferimento a competenze dell'autorita' giudiziaria in tema di acquisto della personalita' giuridica, di tenuta del registro delle persone giuridiche e di iscrizioni nello stesso s'intende fatto alla prefettura ovvero alla regione o provincia autonoma competenti.

2. Le sanzioni di cui all'articolo 35 del codice civile si applicano alle ipotesi di mancata richiesta di iscrizione nei termini e secondo le modalita' previste nel presente regolamento.

Art. 9.

Norme speciali

1. Le norme del presente regolamento sono applicabili ai procedimenti di riconoscimento delle associazioni previste dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatto salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo.

2. Nulla e' innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' degli enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Nei confronti di tali enti trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4.

3. Sono fatte comunque salve le altre norme speciali derogatorie rispetto alla disciplina delle persone giuridiche di cui al libro I, titolo II, del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle norme del presente regolamento

Art. 10.

Norme finali e transitorie

1. I compiti spettanti in base alle disposizioni del presente regolamento al prefetto e alle prefetture si intendono riferiti, per le province autonome di Trento e di Bolzano ai commissari di governo e ai rispettivi uffici, e per la regione Valle d'Aosta al presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio.

2. Le amministrazioni dello Stato provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a trasmettere alle prefetture competenti per territorio gli atti relativi ai procedimenti pendenti, nonche' quelli concernenti le persone giuridiche private che hanno conseguito il riconoscimento nel vigore della precedente disciplina.

3. Entro il medesimo termine, le cancellerie dei tribunali trasmettono alle prefetture, alle regioni ovvero alle province autonome, secondo le rispettive competenze, gli atti relativi alle persone giuridiche iscritte nel registro.

4. I termini di conclusione di tutti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonche' di quelli relativi a domande presentate nelle more dell'istituzione del registro decorrono dalla data di istituzione del medesimo.

5. Fino al momento dell'effettivo trasferimento dei registri e dei relativi atti alle prefetture, ovvero alle regioni o province autonome, al rilascio dei certificati concernenti le persone giuridiche provvede la cancelleria del tribunale.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Al sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 12 del codice civile;

- b) articolo 16, terzo comma, del codice civile;
- c) articolo 27, terzo comma, del codice civile;
- d) articoli 33 e 34, del codice civile;
- e) articolo 35, limitatamente alle parole: "dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalita' stabilite dalle norme di attuazione del codice";
- f) articoli 1, 2, 4, 10, 20, secondo comma, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 febbraio 2000

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica

Bellillo, Ministro per gli affari regionali

Bianco, Ministro dell'interno

Diliberto, Ministro della giustizia

Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2000

Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 2

- **LEGGE 7 agosto 1997, n. 266**
Interventi urgenti per l'economia.

Art. 21 - Piccola societa' cooperativa

1. La piccola societa' cooperativa, quale forma semplificata di societa' cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto soci.
2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "piccola societa' cooperativa". Tale indicazione non puo' essere usata da societa' che non hanno scopo mutualistico.
3. Alla piccola societa' cooperativa si applicano le norme relative alle societa' cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.
4. Nella piccola societa' cooperativa, se il potere di amministrazione e' attribuito all'assemblea, e' necessaria la nomina del presidente, al quale spetta la rappresentanza legale.
5. Alla piccola societa' cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la societa' a responsabilita' limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del Codice civile.
6. Nella piccola societa' cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.
7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge; la piccola societa' cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in societa' cooperativa. La piccola societa'_cooperativa puo' trasformarsi esclusivamente in societa' cooperativa.
8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola societa' cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del Codice civile.

LEGGE 8 novembre 1991

Legge 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali. Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1991, n. 283 . Art. 1. – Definizione. Art. 2. – Soci volontari. Art. 3. – Obblighi e divieti. Art. 4. – Persone svantaggiate. Art. 5. – Convenzioni. Art. 6. – Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. Art. 7. – Regime tributario. Art. 8. – Consorzi. Art. 9. – Normativa regionale. Art. 10. – Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza. Art. 11. – Partecipazione delle persone giuridiche. Art. 12. – Disciplina transitoria.

Art. 1. – Definizione.

Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate¹. 2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano. 3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di «cooperativa sociale».

Art. 2. – Soci volontari. 1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. 2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei

soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. 3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative². 4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. 5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

Art. 3. – Obblighi e divieti. 1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni. 2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla «sezione cooperazione sociale» prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge. 3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.

Art. 4. – Persone svantaggiate. 1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni

3ù. 2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. 3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero. 3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai

sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione.

Art. 5. – Convenzioni. 1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1, le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi. 3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali. 4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolari d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica delle capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 6. – Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. 1. Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, è aggiunto in fine, il seguente comma: «Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale»; b) all'articolo 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale». c) al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole: «Sezione cooperazione sociale». d) all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta»

Art. 7. – Regime tributario. 1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637. 2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale. 3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero: «41-bis. Prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale, o in comunità e simili, o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale»

Art. 8. – Consorzi. 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

Art. 9. – Normativa regionale.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione. 2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti. 3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime. Art. 10. – Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza. 1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815. Art. 11. – Partecipazione delle persone giuridiche. 1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative. Art. 12. – Disciplina transitoria. 1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste. 2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

• **Legge 13 giugno 2005, n. 118**

"Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale"
pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2005

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attività produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica, ad integrazione delle norme dell'ordinamento civile, relativa alle imprese sociali, intendendosi

come imprese sociali le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Tale disciplina deve essere informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire, nel rispetto del quadro normativo e della specificità propria degli organismi di promozione sociale, nonché della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle società e delle cooperative, e delle norme concernenti la cooperazione sociale e gli enti ecclesiastici, il carattere sociale dell'impresa sulla base:

1) delle materie di particolare rilievo sociale in cui essa opera la prestazione di beni e di servizi in favore di tutti i potenziali fruitori, senza limitazione ai soli soci, associati o partecipi;

2) del divieto di ridistribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, ad amministratori e a persone fisiche o giuridiche partecipanti, collaboratori o dipendenti, al fine di garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione all'attività dell'impresa;

3) dell'obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale o ad incremento del patrimonio;

4) delle caratteristiche e dei vincoli della struttura proprietaria o di controllo, escludendo la possibilità che soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative possano detenere il controllo, anche attraverso la facoltà di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione;

b) prevedere, in coerenza con il carattere sociale dell'impresa e compatibilmente con la struttura dell'ente, omogenee disposizioni in ordine a:

1) elettività delle cariche sociali e relative situazioni di incompatibilità;

2) responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci e dei terzi;

3) ammissione ed esclusione dei soci;

4) obbligo di redazione e di pubblicità del bilancio economico e sociale, nonché di previsione di forme di controllo contabile e di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa;

5) obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di cessazione dell'impresa, ad altra impresa sociale ovvero ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, fatto salvo, per le cooperative sociali, quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;

6) obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;

7) definizione delle procedure concorsuali applicabili in caso di insolvenza;

8) rappresentanza in giudizio da parte degli amministratori e responsabilità limitata al patrimonio dell'impresa per le obbligazioni da questa assunte;

9) previsione di organi di controllo;

10) forme di partecipazione nell'impresa anche per i diversi prestatori d'opera e per i destinatari delle attività;

11) una disciplina della trasformazione, fusione e cessione d'azienda in riferimento alle imprese sociali tale da preservarne la qualificazione e gli scopi e garantire la destinazione dei beni delle stesse a finalità di interesse generale;

12) conseguenze sulla qualificazione e la disciplina dell'impresa sociale, derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni relative ai requisiti dell'impresa sociale e dalla violazione di altre norme di legge, in particolare in materia di lavoro e di sicurezza, nonché della contrattazione collettiva, in quanto compatibile con le caratteristiche e la natura giuridica dell'impresa sociale;

c) attivare, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e di ricerca necessari alla verifica della qualità delle prestazioni rese dalle imprese sociali;

d) definire la disciplina dei gruppi di imprese sociali secondo i principi di trasparenza e tutela delle minoranze, regolando i conflitti di interesse e le forme di abuso da parte dell'impresa dominante.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede a coordinare le disposizioni dei medesimi decreti con le disposizioni vigenti nelle stesse materie e nelle materie connesse, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le rappresentanze del terzo settore, ferme restando le disposizioni in vigore concernenti il regime giuridico e amministrativo degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

3. Dall'attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.

5. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri ai sensi del comma 4, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, trasmette nuovamente alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

6. Decorso i termini di cui ai commi 4 e 5 senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

• **DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n.155**

Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 9 febbraio 2006;

Sentite le rappresentanze del terzo settore;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attività produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Nozione

1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi non acquisiscono la qualifica di impresa sociale.

3. Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese si applicano le norme di cui al presente decreto limitatamente allo svolgimento delle attività elencate all'articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del presente decreto. Per tali attività devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dall'articolo 10. Il regolamento deve contenere i requisiti che sono richiesti dal presente decreto per gli atti costitutivi.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Nota al titolo:

- Il testo della legge 13 giugno 2005, n. 118 (Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2005, n. 153.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- L'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, stabilisce che lo Stato ha la legislazione esclusiva nelle seguenti materie: giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa.

- Per il testo della citata legge n. 118 del 2005, si veda la nota al titolo.

Nota all'art. 1:

- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è il seguente:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,

regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 2.

Utilita' sociale

1. Si considerano beni e servizi di utilita' sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:

- a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;
- c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;
- d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attivita', esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;
- h) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

2. Indipendentemente dall'esercizio della attivita' di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attivita' di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:

- a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;
- b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

3. Per attivita' principale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo Della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa.

4. I lavoratori di cui al comma 2 devono essere in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa; la relativa situazione deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

5. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo.

Note all'art. 2:

- Il testo della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e' pubblicato nella Gaceta Ufficiale 13 novembre 2000, n. 265, S.O.

- Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, S.O.

- Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2001, n. 129.

- Il testo della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77.

- Il testo della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2001, n. 129.

- Il testo del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. e cosi' corretto con comunicato 26 febbraio 2004 (Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2004, n. 47).

- Il testo dell'art. 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), e' il seguente:

«10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonche' le associazioni pro loco, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali».

- Il regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, e' pubblicato in GUCE n. L 337 del 13 dicembre 2002.

Art. 3.

Assenza dello scopo di lucro

1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attivita' statutaria o ad incremento del patrimonio.

2. A tale fine e' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonche' fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;

- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche professionalita';
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Art. 4.

Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi

1. All'attivita' di direzione e controllo di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545-septies del codice civile. Si considera, in ogni caso, esercitare attivita' di direzione e controllo il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facolta' di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione.
2. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, secondo le linee guida di cui all'articolo 10.
3. Le imprese private con finalita' lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attivita' di direzione e detenere il controllo di un'impresa sociale.
4. Nel caso di decisione assunta con il voto o l'influenza determinante dei soggetti di cui al comma 3, il relativo atto e' annullabile e puo' essere impugnato in conformita' delle norme del codice civile entro il termine di 180 giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Note all'art. 4:

- Il Capo IX del titolo V del libro V del codice civile reca: «Delle societa' costituite all'estero od operante all'estero».

- Il testo dell'art. 2545-septies del codice civile, e' il seguente:

«Art. 2545-septies (Gruppo cooperativo paritetico). -

Il contratto con cui piu' cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:

- 1) la durata;
- 2) la cooperativa o le cooperative cui e' attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
- 3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
- 4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso *dal contratto*;
- 5) *i criteri di compensazione e l'equilibrio nella* distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune.

La cooperativa puo' recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.

Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo delle societa' cooperative».

- Per il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda la nota all'art. 1.

Art. 5.

Costituzione

1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa in conformita' alle norme del presente decreto ed in particolare indicare:

- a) l'oggetto sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2;
- b) l'assenza di scopo di lucro, di cui all'articolo 3.

2. Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione. Si applica l'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di cui all'articolo 16, accede anche in via telematica agli atti depositati presso l'ufficio del registro delle imprese.

4. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni.

5. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti gli atti che devono essere depositati e le procedure di cui al presente articolo.

Nota all'art. 5:

- Il testo dell'art. 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999), e' il seguente:

«2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalita' ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Art. 6.

Responsabilita' patrimoniale

1. Salvo quanto gia' disposto in tema di responsabilita' limitata per le diverse forme giuridiche previste dal libro V del codice civile, nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui patrimonio e' superiore a ventimila euro, dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio.

2. Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio e' diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo di cui al comma 1, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa.

3. La disposizione di cui al presente articolo non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 7.

Denominazione

1. Nella denominazione e' obbligatorio l'uso della locuzione: «impresa sociale».
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.
3. L'uso della locuzione: «impresa sociale» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno e' vietato a soggetti diversi dalle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

Art. 8.

Cariche sociali

1. Negli enti associativi, la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non puo' essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa sociale, salvo quanto specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura.
2. Non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 3.
3. L'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilita', professionalita' ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.

Art. 9.

Ammissione ed esclusione

1. Le modalita' di ammissione ed esclusione dei soci, nonche' la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione, compatibilmente con la forma giuridica dell'ente.
2. Gli atti costitutivi devono prevedere la facolta' dell'istante che dei provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione possa essere investita l'assemblea dei soci.

Art. 10.

Scritture contabili

1. L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, in ogni caso, tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonche' redigere e depositare presso il registro delle imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa.
2. L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, inoltre, redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalita' sociali da parte dell'impresa sociale.
3. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano limitatamente alle attivita' indicate nel regolamento.

Nota all'art. 10:

- Il testo degli articoli 2216 e 2217 del codice civile, e' il seguente:

«Art. 2216 (Contenuto del libro giornale). - Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa.».

«Art. 2217 (Redazione dell'inventario). - L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione

delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.

L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.

L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette».

Art. 11.

Organi di controllo

1. Ove non sia diversamente stabilito dalla legge, gli atti costitutivi devono prevedere, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, la nomina di uno o più sindaci, che vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

2. I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2.

3. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

4. Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia o dai sindaci.

Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Nota all'art. 11:

- Il testo dell'art. 2435-bis, primo comma, del codice civile, è il seguente:

«Art. 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata). – Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Art. 12.

Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

1. Ferma restando la normativa in vigore, nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.

2. Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Art. 13.

Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio

1. Per le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro di cui all'articolo 3 dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalita' di interesse generale di cui all'articolo 2 da parte del cessionario. Per gli enti di cui di cui all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attivita' indicate nel regolamento.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformita' a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.
3. Salvo quanto previsto in tema di cooperative, in caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo e' devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.
4. Gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformita' alle linee guida di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.
5. L'efficacia degli atti e' subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando il beneficiario dell'atto e' un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.

Art. 14.

Lavoro nell'impresa sociale

1. Ai lavoratori dell'impresa sociale non puo' essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.
2. Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, e' ammessa la prestazione di attivita' di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. Si applicano gli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
3. I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalita' specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2.

Nota all'art. 14:

- Il testo degli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), e' il seguente:

«Art. 2 (Attivita' di volontariato). - 1. Ai fini Della presente legge per attivita' di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite

l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà'.

2. L'attività' del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività' prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità' di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte».

«Art. 4 (Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato). - 1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività' di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività' stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli».

«Art. 17 (Flessibilità nell'orario di lavoro). - 1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6, per poter espletare attività' di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale».

Art. 15.

Procedure concorsuali

1. In caso di insolvenza, le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Alla devoluzione del patrimonio residuo al termine Della procedura concorsuale si applica l'articolo 13, comma 3.

Nota all'art. 15:

- Il testo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa - Testo in vigore dal 16 luglio

2006), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1942, n. 81.

Art. 16.

Funzioni di monitoraggio e ricerca

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove attività' di raccordo degli uffici competenti, coinvolgendo anche altre amministrazioni dello Stato, l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le parti sociali, le agenzie tecniche e gli enti di ricerca di cui normalmente si avvale o che siano soggetti alla sua vigilanza, e le parti sociali, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività' di monitoraggio e ricerca.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi delle proprie strutture territoriali, esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali.

3. In caso di accertata violazione delle norme di cui al presente decreto o di gravi inadempienze delle norme a tutela dei lavoratori, gli uffici competenti del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, assunte le opportune informazioni, diffidano gli organi direttivi dell'impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale, applicano le sanzioni di cui al comma 4.

4. In caso di accertata violazione delle norme di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, o di mancata ottemperanza alla intimazione di cui al comma 3, gli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dispongono la perdita della qualifica di impresa sociale. Il provvedimento e' trasmesso ai fini Della cancellazione dell'impresa sociale dall'apposita sezione del registro delle imprese. Si applica l'articolo 13, comma 3.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge i propri compiti e assume le determinazioni di cui al presente articolo sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.

Art. 17.

Norme di coordinamento

1. Le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e gli enti non commerciali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che acquisiscono anche la qualifica di impresa sociale, continuano ad applicare le disposizioni tributarie previste dal medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, subordinatamente al rispetto dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni ivi previsti.

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 dopo la parola: «strumentali» sono inserite le seguenti: «, delle imprese sociali».

3. Le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i cui statuti rispettino le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 12, acquisiscono la qualifica di impresa sociale. Alle cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che rispettino le disposizioni di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soli fini di cui al comma 3, le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, possono modificare i propri statuti con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Note all'art. 17:

- Il testo del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1998, n. 1, S.O.

- Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), come modificato dal presente decreto, e' il seguente:

«2. Non sono consentiti alle fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie; e' esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 81, e successive modificazioni».

- Il testo della legge 8 novembre 1991, n. 381

(Disciplina delle cooperative sociali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1991, n. 283.

Art. 18.

Disposizione di carattere finanziario

1. All'attuazione del presente decreto le amministrazioni competenti provvedono avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Scajola, Ministro delle attività produttive

Castelli, Ministro della giustizia

La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie

Pisanu, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

4.23. JAMAICA

a) LEY DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

<http://faolex.fao.org/docs/pdf/jam71011.pdf>

b) REGLAMENTACIÓN DE LA LEY

<http://www.ilo.org/images/empent/static/coop/policy/pdf/jamaic.pdf>

4.24. MEXICO

LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis

Nueva Ley DOF 23-05-2012

**LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA
TEXTO VIGENTE**

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2012

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-
Presidencia de la República.

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE EXPIDE LA LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL
PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA
ECONOMÍA

Artículo Único. Se expide la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del
Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1o. La presente Ley es reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo concerniente al Sector Social
de la Economía.

La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el
territorio nacional y se aplicará sin perjuicio de otras disposiciones que dicten los Poderes
Ejecutivo y Legislativo Federal y de las Entidades Federativas, así como municipales, en
el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 2o. La presente Ley tiene por objeto:

I. Establecer mecanismos para facilitar la organización y la expansión de la Actividad
Económica del Sector Social de la Economía y la responsabilidad del fomento e impulso
por parte del Estado.

II. Definir las reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimiento del Sector
Social de la Economía, como un sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y
económico del país, a la generación de fuentes de trabajo digno, al fortalecimiento de la
democracia, a la equitativa distribución del ingreso y a la mayor generación de patrimonio
social.

Artículo 3o. El Sector Social de la Economía es el sector de la economía a que hace
mención el párrafo séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el cual se integra por el conjunto de organizaciones sociales en los
términos que establece la presente Ley.

Artículo 4o. El Sector Social de la Economía estará integrado por las siguientes formas
de organización social:

I. Ejidos;

II. Comunidades;

III. Organizaciones de trabajadores;

IV. Sociedades Cooperativas;

V. Empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores; y

VI. En general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución
y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Artículo 5o. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

- I. Sector, al Sector Social de la Economía a que hace mención el párrafo séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- II. Organismos del Sector, a las organizaciones, empresas y sociedades del Sector Social de la Economía;
- III. Secretaría, a la Secretaría de Economía;
- IV. Instituto, al Instituto Nacional de la Economía Social;
- V. Congreso Nacional, al Congreso Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía;
- VI. Consejo Nacional, al Consejo Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía;
- VII. Asociados, en singular o plural, a las personas que participan en el capital social de los Organismos del Sector;
- VIII. Organismos de Integración, en singular o plural, a organismos de representación de segundo o grados superiores del Sector;
- IX. Programa, al Programa de Fomento a la Economía Social;
- X. Registro, al Registro Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía;
- XI. Actividad Económica, cualquier proceso mediante el cual se obtienen productos, bienes o servicios socialmente necesarios, en cualquiera de sus fases de producción, distribución o consumo, y en cualquier de los sectores primario, secundario o terciario;
- XII. Organismo de segundo grado, en singular o plural a los organismos de integración en los que se integren los organismos del sector;
- XIII. Organismo de tercer grado, en singular o plural a los organismos de integración en los que se integren los organismos del sector de segundo grado, y
- XIV. Organismo de cuarto grado, en singular o plural a los organismos de integración en los que se integren los organismos del sector de tercer grado.

Artículo 6o. El Estado apoyará e impulsará a los Organismos del Sector bajo criterios de equidad social y productividad, sujetándolas a las modalidades que dicte el interés público, y conforme al uso, en beneficio general, de los recursos productivos que tendrán la obligación de proteger y conservar, preservando el medio ambiente.

Artículo 7o. Los Organismos del Sector legalmente constituidos podrán acogerse y disfrutar de los apoyos y estímulos que establece esta Ley, en estricta observancia de los valores, principios y prácticas señalados en los artículos 9, 10 y 11 de la misma..

Artículo 8o. Son fines del Sector Social de la Economía:

- I. Promover el desarrollo integral del ser humano;
- II. Contribuir al desarrollo socioeconómico del país, participando en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios;
- III. Fomentar la educación y formación impulsando prácticas que consoliden una cultura solidaria, creativa y emprendedora;
- IV. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa;
- V. Participar en el diseño de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social, en términos de la legislación aplicable;
- VI. Facilitar a los Asociados de los Organismos del Sector la participación y acceso a la formación, el trabajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna.

Artículo 9o. Los Organismos del Sector tomarán en cuenta en su organización interna, los siguientes principios:

- I. Autonomía e independencia del ámbito político y religioso;
- II. Régimen democrático participativo;
- III. Forma autogestionaria de trabajo;
- IV. Interés por la comunidad.

Artículo 10. Los Organismos del Sector orientarán su actuación en los siguientes valores:

- I. Ayuda mutua;
- II. Democracia;
- III. Equidad;
- IV. Honestidad;
- V. Igualdad;
- VI. Justicia;
- VII. Pluralidad;
- VIII. Responsabilidad compartida;
- IX. Solidaridad;
- X. Subsidiariedad, y
- XI. Transparencia.

Artículo 11. Los Organismos del Sector realizarán sus actividades conforme a las leyes que regulen su naturaleza jurídica específica, sus estatutos sociales y de acuerdo con las siguientes prácticas:

- I. Preeminencia del ser humano y su trabajo sobre el capital;
- II. Afiliación y retiro voluntario;
- III. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora;
- IV. Trabajo en beneficio mutuo y de la comunidad;
- V. Propiedad social o paritaria de los medios de producción;
- VI. Participación económica de los Asociados en justicia y equidad;
- VII. Reconocimiento del derecho a afiliarse como Asociado a las personas que presten servicios personales en los Organismos del Sector, sobre la base de su capacitación en los principios y valores del Sector, y el cumplimiento de los requisitos que establezcan sus bases constitutivas;
- VIII. Destino de excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus Asociados parte de los mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo del Organismo del Sector;
- IX. Educación, formación y capacitación técnico administrativa permanente y continua para los Asociados;
- X. Promoción de la cultura solidaria y de la protección del medio ambiente entre sus Asociados y la comunidad;
- XI. Información periódica de sus estados financieros y de resultados a todos y cada uno de sus Asociados, a través de los informes a sus órganos de dirección, administración y vigilancia, así como libre acceso a la información respectiva para los mismos;
- XII. Integración y colaboración con otros Organismos del Sector, y
- XIII. Compromiso solidario con las comunidades donde desarrollan su actividad.

Artículo 12. En lo no previsto por la presente Ley se aplicará supletoriamente:

- I. La legislación específica de las distintas figuras en que se constituyan los Organismos del Sector;

- II. En su caso la Legislación Civil Federal, y
 - III. Los usos y prácticas imperantes entre los Organismos del Sector.
- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, interpretará para efectos administrativos los preceptos de la presente Ley.

TÍTULO II

DE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA

CAPÍTULO I

DEL INSTITUTO

Artículo 13. Se crea el Instituto Nacional de la Economía Social como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, el cual contará con autonomía técnica, operativa y de gestión en los términos establecidos en esta Ley. El Instituto tiene como objeto instrumentar políticas públicas de fomento al sector social de la economía, con el fin de fortalecer y consolidar al sector como uno de los pilares de desarrollo económico del país, a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del sector.

Artículo 14. El Instituto tendrá como funciones las siguientes:

- I. Instrumentar la Política Nacional de Fomento y Desarrollo del Sector Social de la Economía;
- II. Propiciar condiciones favorables para el crecimiento y consolidación del Sector, mediante el establecimiento del Programa de Fomento a la Economía Social;
- III. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley;
- IV. Formular y ejecutar programas y proyectos de apoyo público a la promoción, fomento y desarrollo del Sector;
- V. Participar en la elaboración, consecución y verificación del Plan Nacional de Desarrollo, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades económicas que desarrollen los Organismos del Sector;
- VI. Ser órgano consultivo del Estado en la formulación de políticas relativas al Sector, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades económicas que desarrollen los Organismos del Sector;
- VII. Establecer en colaboración con el Consejo Nacional un modelo de supervisión a los Organismos del Sector, salvo aquellos casos en los que las Leyes en sectores específicos dispongan algún tipo de supervisión especial a los Organismos del Sector, tomando en cuenta su propio balance social;
- VIII. Llevar a cabo estudios e investigaciones y elaborar estadísticas que permitan el conocimiento de la realidad de los Organismos del Sector y de su entorno, para el mejor cumplimiento de su objeto;
- IX. Promover la consolidación empresarial y el desarrollo organizacional de las diversas formas asociativas que integran el Sector, para lo cual establecerá un Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Especializada, mediante la firma de convenios de coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal, así como con dependencias de las Entidades Federativas y Municipios;
- X. Promover en el ámbito nacional e internacional los bienes y servicios producidos por los Organismos del Sector, siempre la legislación específica en la materia de cada Organismo del

Sector se los permita;

XI. Promover la creación de Organismos de Integración del Sector de conformidad por lo dispuesto en las leyes específicas para cada una de las formas asociativas que los integran;

XII. Promover y apoyar la creación de Organismos del Sector que se constituyan y operen conforme a las Leyes que regulan sus materias específicas, para la prestación de servicios financieros al mismo Sector;

XIII. Difundir los valores, principios y fines del Sector, así como sus principales logros empresariales y asociativos;

XIV. Elaborar y mantener actualizado el catálogo de los diferentes tipos de Organismos del Sector, teniendo en cuenta los principios, valores y fines establecidos en la presente Ley;

XV. Establecer y mantener actualizado el Registro Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía;

XVI. Establecer un Observatorio del Sector Social de la Economía, que sirva como herramienta para la sistematización de las experiencias nacionales del Sector;

XVII. Definir las distintas regiones geoeconómicas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley, y

XVIII. Las demás que señale su Reglamento Interno.

Artículo 15. El Instituto contará con los siguientes recursos para el cumplimiento de su objeto:

I. Los recursos que se le asignen a través de la Secretaría en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y

II. Los subsidios, donaciones y legados que reciba a través de la Secretaría de personas físicas o morales, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, los cuales de ninguna manera podrán

implicar condiciones contrarias a su objeto conforme lo establece la Ley.

Artículo 16. Para la consecución de su objeto y para el ejercicio de sus atribuciones el Instituto se integrará de los órganos siguientes:

I. Un Consejo Consultivo, integrado por el Director General, seis consejeros electos con carácter honorífico por el Congreso Nacional y diez consejeros designados por el Secretario de Economía;

II. Un Director General, designado y removido libremente por el Titular del Ejecutivo Federal a propuesta del Secretario de Economía, y

III. Las instancias, unidades administrativas y servidores públicos necesarios para la consecución de su objeto.

Artículo 17. El Consejo Consultivo sesionará por lo menos cada tres meses y tomará sus acuerdos, recomendaciones y resoluciones por voto de mayoría. Podrá sesionar de manera extraordinaria cuando la situación así lo amerite según lo establezca el Reglamento del Instituto. El Consejo Consultivo sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros.

Son atribuciones indelegables del Consejo Consultivo:

I. Opinar sobre el programa anual de actividades del Instituto;

II. Opinar y recomendar sobre el Informe de Labores Anual que presente el Director General del Instituto;

III. Opinar el Anteproyecto de Presupuesto que emitirá el Instituto a través de la Secretaría;

- IV. Opinar y sugerir sobre los programas y acciones de fomento a la actividad económica del Sector que realizará el Instituto, y
- V. Las demás que señale el Reglamento del Instituto.

Artículo 18. El Director General, tendrá las siguientes facultades:

- I. Ejercer la representación legal del Instituto;
- II. Elaborar el programa anual de actividades del Instituto;
- III. Elaborar, proponer y someter a consideración del Secretario de Economía, para su aprobación, los programas y acciones de fomento a la actividad económica del Sector;
- IV. Presentar un informe anual de actividades, y
- V. Las demás que señale el Reglamento del Instituto.

Artículo 19. El Instituto contará con delegaciones regionales en términos del Acuerdo que emita el Secretario de Economía, y en su caso atenderán a los Organismos del Sector de las distintas regiones geoeconómicas.

Los titulares de las delegaciones tendrán las atribuciones que determine el Estatuto Orgánico del mismo.

Artículo 20. Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores, se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado “B” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CAPÍTULO II DEL CONGRESO Y CONSEJO NACIONAL

Artículo 21. El Congreso Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía es el máximo órgano de representación del Sector, y estará conformado de acuerdo a los siguientes criterios y su propio reglamento interno:

- I. Dos congresistas de cada uno de los Organismos del Sector de segundo, tercer y cuarto grado, que estén dentro del Registro nacional.
- II. Cien congresistas electos en asambleas regionales, convocadas y desarrolladas por el Instituto, con base a las distintas regiones geoeconómicas que establezca el Instituto con base a sus atribuciones; así como los respectivos Organismos de Integración registrados.

Artículo 22. Son funciones del Congreso Nacional:

- I. Fomentar y difundir los principios, valores y fines del Sector;
- II. Promover la integración de los componentes del Sector;
- III. Emitir de manera conjunta y/o con la anuencia de los Organismos de Integración que, conforme al asunto, deban conocer del tema, posicionamientos con respecto a las problemáticas que afecten al Sector;
- IV. Aprobar sus propios estatutos y reglamentos internos;
- V. Elegir a través de su pleno y en apego a su reglamento interno, a los representantes propietarios y suplentes, ante el Instituto, así como a los consejeros del Consejo Nacional, y
- VI. Las demás que establezca su reglamento interno, que no contravengan las disposiciones de esta Ley.

Artículo 23. El Congreso Nacional se convocará cada tres años de manera ordinaria, pudiendo realizarse convocatoria extraordinaria cuando exista acuerdo de dos terceras partes de los miembros de

la Junta Directiva del Consejo Nacional.

Artículo 24. El Consejo Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía es un órgano operativo y de coordinación del Congreso Nacional y desarrollará las actividades de apoyo al Sector.

Artículo 25. Son funciones y atribuciones del Consejo Nacional:

- I. Convocar las sesiones del Congreso Nacional;
- II. Servir como Organismo de coordinación, discusión y exposición de todos los asuntos de interés para el Sector, debiendo para ello tomar en cuenta la opinión de aquellos Organismos de Integración que, conforme a su actividad, les corresponda conocer de dichos asuntos;
- III. Apoyar en la gestoría a favor de los Organismos del Sector en trámites ante cualquier instancia pública o privada;
- IV. Brindar en coordinación con el Instituto y las dependencias correspondientes de la Administración Pública Federal, de los tres órdenes de gobierno, capacitación y asesoría a los Organismos del Sector en actividades agrícolas, ganaderas, silvícola, pecuarias, pesqueras y las demás de explotación y aprovechamiento de recursos naturales, así como para la transformación y comercialización de productos;
- V. Participar en la elaboración, consecución y verificación del Plan Nacional de Desarrollo, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades económicas que desarrollen los Organismos de Sector;
- VI. Promover la creación de Organismos de integración, considerando los lineamientos que señalen las leyes respectivas;
- VII. Promover y apoyar la creación de Organismos del Sector que se constituyan y operen conforme a las Leyes que regulan sus materias específicas, para la prestación de servicios financieros al mismo Sector, y
- VIII. Las demás que establezca su reglamento interno, que no contravengan las disposiciones de esta Ley.

Artículo 26. El Consejo Nacional será conformado por 15 Consejeros electos por un periodo de tres años por el pleno del Congreso Nacional, los cuales no podrán ser reelectos para el periodo inmediato y estando impedidos para ser representantes ante el Instituto al mismo tiempo de su encargo en el Consejo Nacional.

Artículo 27. El Consejo Nacional tendrá la estructura organizativa más conveniente para el cumplimiento de sus objetivos, pero deberá contar, al menos, con los siguientes órganos:

- I. Junta Directiva;
- II. Órgano de Vigilancia, y
- III. Área especializada en educación y capacitación en economía social de acuerdo a lo que establezca su reglamento interno.

Artículo 28. La Junta Directiva será el órgano responsable de la dirección y coordinación de las actividades del Consejo Nacional, así como de su representante legal.

Se conformará como lo establezca el reglamento interno del Consejo Nacional y entre sus atribuciones estarán:

- I. Designar al Secretario Ejecutivo;

- II. Nombrar a sus representantes ante el Registro Nacional;
- III. Ejecutar sus acuerdos y decisiones;
- IV. Elaborar el presupuesto y los programas de trabajo, y
- V. Presentar al Congreso Nacional los estados financieros y los informes de su actuación para su aprobación.

Artículo 29. El Órgano de Vigilancia tendrá las atribuciones de fiscalizar la adecuada administración de los recursos patrimoniales del Consejo.

Artículo 30. El Congreso Nacional y el Consejo Nacional se financiarán con las aportaciones económicas de los Organismos de Integración y de las cuotas por los servicios otorgados a los Organismos del Sector.

Además, estos órganos podrán recibir donaciones, subsidios, herencias, legados y recursos análogos que reciban de personas físicas y morales, públicas o privadas, nacionales o internacionales destinados a incrementar su patrimonio.

CAPÍTULO III DE LOS ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN

Artículo 31. Los Organismos del Sector podrán asociarse entre sí para el mejor cumplimiento de sus fines, en Organismos de Integración de segundo, tercer o cuarto grado.

Aquellos de índole económico no necesariamente serán especializados en determinado ramo o actividad económica.

Los requisitos y procedimientos para constituir Organismos de Integración de cualquier grado serán los establecidos por las leyes específicas que corresponda a cada una de las formas asociativas de los

Organismos del Sector y en las leyes de materia civil aplicables.

Artículo 32. Los Organismos de Integración de segundo grado podrán agruparse en Organismos de tercer grado y cuarto grado, de índole nacional o sectorial, con el propósito de orientar procesos de desarrollo del movimiento y unificar acciones de defensa y representación nacional o internacional.

Artículo 33. Los Organismos de Integración de tercer grado y cuarto grado deberán precisar claramente en sus estatutos su jurisdicción, así como los sectores económicos o las formas asociativas o solidarias que representan.

Artículo 34. Los Organismos de Integración ejercerán de pleno derecho la representación y defensa de los derechos e intereses de sus Asociados y de la rama de la actividad económica en que actúan, así como de los beneficios y preferencias que concede esta y demás leyes específicas a los Organismos del Sector.

Podrán prestar u obtener en común servicios profesionales y técnicos de asesoría, apoyo financiero, asistencia técnica, educación, capacitación e investigación científica y tecnológica.

Artículo 35. Los Organismos de Integración de segundo, tercer y cuarto grado deberán inscribirse en el Registro, a fin de que le sea reconocida su representatividad.

CAPÍTULO IV

DEL REGISTRO

Artículo 36. El Registro Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía, es el instrumento público encargado de la sistematización de la información y registro de los Organismos del Sector.

Artículo 37. Los Organismos del Sector si desean acogerse a los beneficios y prerrogativas de los programas a que se refiere la presente Ley, además de constituirse y realizar su registro conforme lo establezcan las leyes específicas que los regulan según su naturaleza, podrán solicitar su inscripción ante el Registro, conforme a las disposiciones marcadas en el Reglamento del mismo.

Artículo 38. El Registro dependerá del Instituto de conformidad con su reglamento y será el encargado de llevar las inscripciones de los Organismos del Sector legalmente constituidos.

La Secretaría de Economía, a través del Instituto constituirá el Registro Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía, conformado por los asientos registrales siguientes:

- I. La denominación social;
- II. El domicilio social, y
- III. Los Estatutos Sociales.

La información del Registro se integrara de manera económica, electrónica y simplificada; siendo el Instituto responsable de su elaboración, resguardado y actualización; pudiendo complementarse para reducir costos, con la información que la Secretaría de Relaciones Exteriores; el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el Registro Público del Comercio, así como las demás dependencias públicas que cuenten con información relativa a los organismos del sector, en estricto apego a sus atribuciones conferidas por su legislación específica le proporcione, para la integración del mismo.

Artículo 39. El Registro será público, por lo que cualquier ciudadano podrá solicitar información, en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 40. El Instituto publicará anualmente un compendio de información básica sobre los Organismos del Sector registrados, así como su capacidad y cobertura de servicios.

TÍTULO III DE LOS ORGANISMOS DEL SECTOR

CAPÍTULO I DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANISMOS DEL SECTOR

Artículo 41. Se reconocerá el carácter de Organismo del Sector a todas aquellas organizaciones que hayan cumplido con los ordenamientos de la ley respectiva según su naturaleza para su constitución y registro, y además reúnan los siguientes requisitos:

- I. La aceptación y respeto de los principios, valores y prácticas enunciados en los artículos 9, 10 y 11 de la presente Ley;
- II. Estar considerado en alguna de las categorías del catalogo de Organismos del Sector, elaborado por el Instituto, y

III. Estar inscrito en el Registro en los términos de la presente Ley y del reglamento respectivo.

Artículo 42. Los Organismos del Sector; siempre que la legislación específica en la materia de la actividad económica que desarrollen, su objeto social y su naturaleza legal se los permita, podrán desarrollar las siguientes actividades económicas:

- I. Producción, prestación y comercialización de bienes y servicios;
- II. Explotación de bienes propiedad de la nación, así como prestación de servicios públicos, siempre y cuando obtengan los permisos o concesiones respectivos;
- III. De educación, salud, gremiales, deportivas, recreacionales, culturales y sociales en beneficio de los socios y la comunidad;
- IV. De servicios financieros de seguros, crédito, ahorro y préstamo, y
- V. Todas las actividades económicas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

En el caso de las actividades de ahorro y préstamo a que se refiriere la fracción IV de este artículo, deberá observarse y dar estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito. En cuanto a los servicios de seguro deberá obtenerse las autorizaciones o registros previstos en la ley de la materia.

Los Organismos del Sector les estará prohibido realizar actividades de proselitismo partidista y político-electoral.

Artículo 43. Los Organismos del Sector adoptarán la estructura interna que señale la legislación específica de cada una de las formas asociativas y sus propios estatutos, y que más se adecue a sus necesidades, debiendo contar al menos con los siguientes:

- I. Un Órgano de Dirección, Asamblea General, u otra figura similar;
- II. Un Órgano o Consejo de Administración, Comisario, Gerente, Director General, o figura similar, y
- III. Un Órgano o Consejo de Vigilancia y Control Interno;

Los miembros de los Órganos encargados de la administración, la vigilancia y el control interno serán designados y podrán ser removidos por decisión de la mayoría del Órgano de Dirección o Asamblea General, de conformidad con sus propios estatutos

CAPÍTULO II

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ORGANISMOS DEL SECTOR

Artículo 44. Sin perjuicio de los derechos y prerrogativas que establecen las leyes relativas a las distintas formas asociativas, se reconocen a los Organismos del Sector los siguientes derechos:

- I. Ser sujetos de fomento y apoyo a sus actividades económicas por parte del Estado;
- II. Gozar de autonomía en cuanto a su régimen interno;
- III. Constituir sus órganos representativos;
- IV. Realizar observaciones y propuestas al Instituto en relación con las políticas, programas y acciones de fomento y apoyo de sus actividades;
- V. Solicitar y recibir información sobre el estado que guarden las gestiones que hubieren realizado ante las dependencias del gobierno;
- VI. Recibir asesoría, asistencia técnica y capacitación por parte de las autoridades competentes de acuerdo a la presente Ley;
- VII. Celebrar contratos, actos, operaciones y acuerdos entre sí o con empresas del sector privado y con el sector público, siempre que fueren necesarios o convenientes a sus fines y objeto social, y

VIII. Los organismos del sector de segundo, tercer y cuarto grado podrán elegir a los congresistas que participaran en el Congreso Nacional.

Artículo 45. Los Organismos del Sector tendrán las siguientes obligaciones:

I. Cumplir y hacer cumplir los principios, valores y prácticas consagrados en la presente Ley;

II. Constituir fondos y reservas colectivos e irrepartibles destinados a cubrir pérdidas eventuales y a financiar servicios sociales en beneficio de sus Asociados y de la comunidad, con porcentajes de los excedentes o beneficios percibidos en sus actividades económicas.

En todo caso los fondos mínimos obligatorios serán de reserva, de previsión social y de educación en economía social. Los reglamentos internos definirán los porcentajes, reglas de operación y montos requeridos, y sin detrimento de otros fondos que establezcan las leyes específicas;

III. Utilizar los beneficios que consagra la presente Ley para los fines con que fueron autorizados;

IV. Conservar la documentación que demuestre el otorgamiento y uso de apoyos y estímulos públicos otorgados para los fines de sus actividades económicas;

V. Informar al Instituto anualmente o en los casos que les sea requerido, sobre el ejercicio de los apoyos y estímulos públicos otorgados con fines de fomento;

VI. Proporcionar la información que les sea requerida por el Instituto y demás autoridades competentes sobre sus fines, estatutos, programas, actividades, beneficiarios, patrimonio, operación administrativa y financiera, estados financieros y uso de los apoyos y estímulos públicos que reciban;

VII. Cumplir en tiempo y forma con las normas de las recuperaciones financieras establecidas por el Instituto;

VIII. Acatar las disposiciones, recomendaciones y sanciones administrativas que emita o disponga el Instituto y demás autoridades competentes;

IX. Los Organismos del Sector deberán fomentar y difundir los principios, valores y prácticas de la economía social, formular y promover la implementación, en coordinación con las autoridades

competentes, de estrategias, planes y programas que impulsen el desarrollo del Sector, así como ejercer cualquier actividad lícita en beneficio de sus Asociados y la comunidad;

X. Los Organismos del Sector realizarán programas de planeación estratégica para su desarrollo progresivo, elaborarán informes sobre servicios y beneficios económicos, educativos y sociales prestados en su ejercicio a sus Asociados y a la comunidad;

XI. Promover la profesionalización y capacitación de sus Asociados;

XII. Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de beneficiarios;

XIII. Cumplir con las obligaciones derivadas de los convenios suscritos con el Instituto;

XIV. Informar a sus Asociados a través de su Asamblea General u Órgano de Dirección sobre los servicios y beneficios económicos, educativos y sociales prestados en el respectivo ejercicio, así como de sus estados financieros;

XV. Inscribirse al Registro, así como notificar al mismo de las modificaciones a su acta constitutiva, así como los cambios en sus órganos de dirección, administración y vigilancia en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la modificación respectiva;

XVI. En caso de disolución, transmitir los bienes que haya adquirido con apoyos y estímulos públicos, a otra u otros Organismos del Sector que realicen actividades objeto

de fomento y que estén inscritas en el Registro. El Organismo del Sector que se disuelva tendrá la facultad de elegir a quién transmitirá dichos bienes;
XVII. Contribuir al desarrollo socioeconómico nacional;
XVIII. Las demás que señale la presente Ley y leyes aplicables.

CAPÍTULO III

DEL FOMENTO Y FINANCIAMIENTO DE LOS ORGANISMOS DEL SECTOR

Artículo 46. La Secretaría creará el Programa de Fomento a la Economía Social, cuyo objeto será atender iniciativas productivas del Sector mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución, desarrollo, consolidación y expansión de Organismos del Sector y la participación en esquemas de financiamiento social.

El Programa operará con recursos públicos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los recursos derivados de los convenios que se establezcan con las Entidades Federativas y Municipios.

La operación del Programa se sujetará a las Reglas de Operación que al efecto emita la Secretaría.

Artículo 47. Los Organismos del Sector no podrán recibir los apoyos y estímulos públicos previstos en esta Ley cuando incurran en alguno de los siguientes supuestos:

I. Exista entre sus administradores o representantes y los servidores públicos encargados de otorgar o autorizar los apoyos y estímulos públicos; relaciones de interés o parentesco por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado, o sean cónyuges, y

II. Contraten con recursos públicos a personas con nexos de parentesco con los directivos de la organización, ya sea por consanguineidad o afinidad hasta en cuarto grado.

Artículo 48. Los Organismos del Sector que con fines de fomento reciban apoyos y estímulos públicos, deberán sujetarse a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia.

Además, deberán llevar a cabo sus operaciones conforme a las disposiciones fiscales vigentes en el territorio nacional.

Artículo 49. Tratándose de empresas de participación estatal mayoritaria, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y a las demás disposiciones legales que le resulten aplicables.

Cuando dichas empresas se encuentren en proceso de desincorporación, las autoridades competentes deberán tomar en cuenta a los trabajadores, a través de las organizaciones o empresas del sector ya existentes o las que sean constituidas para tal efecto, para ser considerados en la transferencia de los bienes de estas.

Artículo 50. En los casos en los cuales las empresas de carácter privado presenten conflictos obreropatronales calificados como irreconciliables, las autoridades competentes deberán tomar en cuenta a los trabajadores, a través de las organizaciones o empresas del sector ya existentes o las que sean constituidas para tal efecto, para ser considerados en la transferencia de los bienes de la empresa en cuestión, a fin de que dichas empresas continúen operando con eficiencia y rentabilidad.

Lo anterior, de conformidad y con absoluto respeto a lo que dispongan las leyes laborales y mercantiles en la materia.

Artículo 51. A fin de dar cumplimiento a las disposiciones previstas por los artículos 49 y 50, el Instituto, conforme a sus facultades, brindará asesoría, capacitación y financiamiento de acuerdo sus posibilidades presupuestarias.

CAPÍTULO IV

DE LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE ECONOMÍA SOCIAL Y DEL DESEMPEÑO DE SUS ORGANISMOS DEL SECTOR

Artículo 52. La evaluación periódica del cumplimiento de las políticas públicas de fomento y apoyo a los Organismos del Sector estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, conforme la Ley General de Desarrollo Social.

Artículo 53. Para la evaluación se deberán incluir los indicadores de resultados, de gestión y servicios para medir su cobertura e impacto.

Artículo 54. El proceso de evaluación de la Política de Economía Social, se realizará cada tres años.

Artículo 55. Los resultados de las evaluaciones, serán entregados a la Secretaría de Economía, al Instituto, al Consejo Nacional, a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Comisión de Fomento Económico de la Cámara de Senadores y puestos a la disposición del público en general a través de las páginas Web de esas instancias.

Artículo 56. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Instituto podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo Federal y hacerlas del conocimiento público.

CAPÍTULO V

SANCIONES

Artículo 57. Los Organismos del Sector serán sancionadas cuando a juicio del Instituto según disponga su reglamento, violen las disposiciones de la presente Ley.

Artículo 58. El Instituto podrá imponer sanciones administrativas, en los términos previstos por el Reglamento que al efecto expida el Ejecutivo Federal, a los Organismos y sus administradores que simulando estar constituidos como Organismos del Sector gocen o pretendan gozar de los beneficios y prerrogativas por esta Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La convocatoria y asuntos relativos a la celebración de las asambleas regionales de los Organismos del Sector, será efectuada por la Secretaría a través de sus delegaciones estatales en un plazo no mayor de seis meses después de la publicación de la presente Ley en el Diario Oficial de la Federación. Una vez realizadas las asambleas regionales, la Secretaría deberá convocar a la Instalación del Congreso Nacional.

El Congreso Nacional Constituyente deberá elegir tan pronto como se instituya, a sus Representantes permanentes ante el Consejo Consultivo del Instituto, así como elaborar

su plan de trabajo y su reglamento interno en un plazo no mayor a seis meses después de haber quedado legalmente constituido.

El Congreso Nacional Constituyente tendrá treinta y seis meses a partir del momento de su constitución para convocar a la constitución y la elección democrática del Consejo Nacional.

TERCERO. El Instituto deberá quedar constituido, instalado y reglamentado en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, asumiendo las funciones e integrándose con los recursos financieros, materiales y humanos que actualmente están asignados a la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad.

El personal que, en virtud de esta Ley pase de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad al Instituto, de ninguna forma resultará afectado en las prerrogativas y derechos laborales que hayan adquirido conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley en la materia aplicable.

Los asuntos que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentren pendientes de trámite por parte de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad seguirán a cargo del Instituto hasta su total conclusión.

En tanto se modifique el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía para la reglamentación del Instituto, se continuará aplicando el Reglamento vigente y Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2009, en lo que no se oponga a esta Ley; y, en lo no previsto, se estará a lo que resuelva la Secretaría.

Las facultades, funciones y atribuciones que desempeña actualmente la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, deberán ser concedidas íntegramente al Instituto y reconocidas por el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como en todas las disposiciones legales que al efecto se emitan o modifiquen.

CUARTO. Las normas que regulen al Registro y al Programa, respectivamente, deberán ser expedidas por la Secretaría en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales, posteriores a la fecha de su instalación.

QUINTO. En tanto no se expidan las disposiciones correspondientes, continuarán aplicándose, en lo que no se opongan a esta Ley, las disposiciones reglamentarias y administrativas vigentes a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.

SEXTO. Los apoyos cuyo trámite se haya iniciado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas vigentes antes de la entrada en vigor de esta Ley, se seguirán rigiendo por las mismas hasta su conclusión.

México, D.F., a 30 de abril de 2012.- Sen. Jose Gonzalez Morfin, Presidente.- Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente.- Sen. Renan Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. Martín García Avilés, Secretario.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintidós de mayo de dos mil doce.- Felipe de Jesús Calderón

Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré Romero.-
Rúbrica.

- **LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS**

NOTAS:REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 4 DE JUNIO DE 2001 CON DOS ARTÍCULOS

Artículo Primero

El artículo Tercero del presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción del artículo 26 contenido en el mismo, el cual entrará en vigor a los dos años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 26

Las sociedades cooperativas de consumidores podrán dedicarse a actividades de abastecimiento y distribución, así como a la prestación de servicios relacionados con la educación o la obtención de vivienda.

TEXTO VIGENTE

(Ultima refoma aplicada 04/06/2001)

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 1994

LEY General de Sociedades Cooperativas.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-
Presidencia de la República.

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes
sabed:

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

D E C R E T O

**EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA :
LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS**

TITULO PRIMERO

CAPITULO UNICO

Disposiciones generales

Artículo 1

La presente ley tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de las sociedades cooperativas. Sus disposiciones son de interés social y de observancia general en el territorio nacional.

Artículo 2

La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

Artículo 3

Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I.- Organismos cooperativos, a las uniones, federaciones y confederaciones que integren las sociedades cooperativas, y

II.- Sistema Cooperativo, a la estructura económica y social que integran las sociedades cooperativas y sus organismos.

El Sistema Cooperativo es parte integrante de Movimiento Cooperativo Nacional.

Artículo 4

El Movimiento Cooperativo Nacional comprende al Sistema Cooperativo y a todas las organizaciones e instituciones de asistencia técnica del cooperativismo a nivel nacional. Su máximo representante será el Consejo Superior del Cooperativismo.

Artículo 5

Se consideran actos cooperativos los relativos a la organización y funcionamiento interno de las sociedades cooperativas.

Artículo 6

Las sociedades cooperativas deberán observar en su funcionamiento los siguientes principios:

I.- Libertad de asociación y retiro voluntario de los socios;

II.- Administración democrática;

III.- Limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios si así se pactara;

IV.- Distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los socios;

V.- Fomento de la educación cooperativa y de la educación en la economía solidaria;

VI.- Participación en la integración cooperativa;

VII.- Respeto al derecho individual de los socios de pertenecer a cualquier partido político o asociación religiosa. y

VIII.- Promoción de la cultura ecológica.

Artículo 7

El importe total de las aportaciones que los socios de nacionalidad extranjera efectúen al capital de las sociedades cooperativas, no podrá rebasar el porcentaje máximo que establece la Ley de Investigación Extranjera.

Los extranjeros no podrán desempeñar puestos de dirección o administración en las sociedades cooperativas, además de que deberán cumplir con lo preceptuado por la fracción I del artículo 27 Constitucional.

Artículo 8

Las sociedades cooperativas se podrán dedicar libremente a cualesquiera actividades económicas lícitas.

Artículo 9

Salvo lo dispuesto por las leyes que rigen materias, específicas, para el conocimiento y resolución de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la presente ley, serán competentes los tribunales civiles, tanto los federales como los del fuero común.

Salvo pacto en contrario, el actor podrá elegir el órgano jurisdiccional que conocerá del asunto, a excepción de que una de las partes sea una autoridad federal, en cuyo caso únicamente serán competentes los tribunales federales.

Artículo 10

Las sociedades que simulen constituirse en sociedades cooperativas o usen indebidamente las denominaciones alusivas a las mismas, serán nulas de pleno derecho y estarán sujetas a las sanciones que establezcan las leyes respectivas.

Se aplicará como legislación supletoria en materia de sociedades cooperativas, las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles en lo que no se oponga a la naturaleza, organización y funcionamiento de aquéllas.

TITULO SEGUNDO

CAPITULO I

De la constitución y registro

Artículo 11

En la constitución de las sociedades cooperativas se observará lo siguiente:

I.- Se reconoce un voto por socio, independientemente de sus aportaciones;

II. Serán de capital variable;

III.- Habrá igualdad esencial en derechos y obligaciones de sus socios e igualdad de condiciones para las mujeres;

IV.- Tendrán duración indefinida, y

V.- Se integrarán con un mínimo de cinco socios.

Artículo 12

La constitución de las sociedades cooperativas deberá realizarse en Asamblea General que celebren los interesados, y en la que se levantará una acta que contendrá:

I. Datos generales de los fundadores;

II. Nombres de las personas que hayan resultado electas para integrar por primera vez consejos y comisiones, y

III. Las bases constitutivas.

Los socios deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir la sociedad cooperativa y de ser suyas las

firmas o las huellas digitales que obran en el acta constitutiva, ante notario público, corredor público, juez de distrito, juez de primera instancia en la misma materia del fuero común, presidente municipal, secretario o delegado municipal del lugar en donde la sociedad cooperativa tenga su domicilio.

Artículo 13

A partir del momento de la firma de su acta constitutiva, las sociedades cooperativas contarán con personalidad jurídica, tendrán patrimonio propio y podrán celebrar actos y contratos, así como asociarse libremente con otras para la consecución de su objeto social.

El acta constitutiva de la sociedad cooperativa de que se trate, se inscribirá en el Registro Público de Comercio que corresponda a su domicilio social.

Artículo 14

Las sociedades cooperativas podrán adoptar el régimen de responsabilidad limitada o suplementada de los socios.

La responsabilidad será limitada, cuando los socios solamente se obliguen al pago de los certificados de aportación que hubieren suscrito. Será suplementada, cuando los socios

respondan a prorrata por las operaciones sociales, hasta por la cantidad determinada en el acta constitutiva.

Artículo 15

El régimen de responsabilidad de los socios que se adopte, surtirá efectos a partir de la inscripción del acta constitutiva en el Registro Público de Comercio. Entretanto, todos los socios responderán en forma subsidiaria por las obligaciones sociales que se hubieren generado con anterioridad a dicha inscripción.

Las personas que realicen actos jurídicos como representantes o mandatarios de una sociedad cooperativa no inscrita en el Registro Público de Comercio, responderán del cumplimiento de las obligaciones sociales frente a terceros, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que hubieren incurrido.

Artículo 16

Las bases constitutivas de las sociedades cooperativas contendrán:

- I.- Denominación y domicilio social;
 - II.- Objeto social, expresando concretamente cada una de las actividades a desarrollar;
 - III.- Los regímenes de responsabilidad limitada o suplementada de sus socios, debiendo expresar en su denominación el régimen adoptado;
 - IV.- Forma de constituir o incrementar el capital social, expresión del valor de los certificados de aportación, forma de pago y devolución de su valor, así como la valuación de los bienes y derechos en caso de que se aporten;
 - V.- Requisitos y procedimiento para la admisión, exclusión y separación voluntaria de los socios;
 - VI.- Forma de constituir los fondos sociales, su monto, su objeto y reglas para su aplicación;
 - VII.- Areas de trabajo que vayan a crearse y reglas para su funcionamiento y en particular de la de educación cooperativa en los términos del artículo 47 de esta Ley;
 - VIII.- Duración del ejercicio social que podrá coincidir con el año de calendario, así como el tipo de libros de actas y de contabilidad a llevarse;
 - IX.- Forma en que deberá caucionar su manejo el personal que tenga fondos y bienes a su cargo;
 - X.- El procedimiento para convocar y formalizar las asambleas generales ordinarias que se realizarán por lo menos una vez al año, así como las extraordinarias que se realizarán en cualquier momento a pedimento de la Asamblea General, del Consejo de administración, del de vigilancia o del 20% del total de los miembros;
 - XI.- Derechos y obligaciones de los socios, así como mecanismos de conciliación y arbitraje en caso de conflicto sobre el particular;
 - XII.- Formas de dirección y administración interna, así como sus atribuciones y responsabilidades, y
 - XIII.- Las demás disposiciones necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad cooperativa siempre que no se opongan a lo establecido en esta ley.
- Las cláusulas de las bases constitutivas que no se apeguen a lo dispuesto por esta ley, serán nulas de pleno derecho para todos los efectos legales correspondientes.

Artículo 17

Las oficinas encargadas del Registro Público de Comercio, deberán expedir y remitir en forma gratuita, a la Secretaría de Desarrollo Social, copia certificada de todos los documentos que sean objeto de inscripción por parte de las sociedades cooperativas, así

como la información que solicite la propia dependencia, a fin de integrar y mantener actualizada la estadística nacional de sociedades cooperativas.

Artículo 18

No se otorgará el registro a las sociedades cooperativas de participación estatal, sí la autoridad que corresponda no manifiesta que existe acuerdo con la sociedad de que se trate, para dar en administración los elementos necesarios para la producción.

Artículo 19

Para la modificación de las bases constitutivas, se deberá seguir el mismo procedimiento que señala esta Ley para el otorgamiento del acta constitutiva y deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio.

Artículo 20

La vigilancia de las sociedades cooperativas estará a cargo de las dependencias locales o federales que, de acuerdo con sus atribuciones, deban intervenir en su buen funcionamiento.

CAPITULO II

De las distintas clases y categorías de sociedades cooperativas

Artículo 21

Forman parte del Sistema Cooperativo las siguientes clases de sociedades cooperativas:

- I.- De consumidores de bienes y/o servicios, y
- II.- De productores de bienes y/o servicios.
- III.- De ahorro y préstamo.

Artículo 22

Son sociedades cooperativas de consumidores, aquéllas cuyos miembros se asocien con el objeto de obtener en común artículos, bienes y/o servicios para ellos, sus hogares o sus actividades de producción.

Artículo 23

Las sociedades cooperativas de consumidores, independientemente de la obligación de distribuir artículos o bienes de los socios, podrán realizar operaciones con el público en general siempre que se permita a los consumidores afiliarse a las mismas en el plazo que establezcan sus bases constitutivas. Estas cooperativas no requerirán más autorizaciones que las vigentes para la actividad económica específica.

Artículo 24

Los excedentes en las sociedades cooperativas de consumidores que reporten los balances anuales, se distribuirán en razón de las adquisiciones que los socios hubiesen efectuado durante el año fiscal.

Artículo 25

En caso de que los compradores de que habla el artículo 23 de esta Ley, ingresaran como socios a las sociedades cooperativas de consumo, los excedentes generados por sus compras, se aplicarán a cubrir y pagar su certificado de aportación. Si los compradores no asociados, no retirasen en el plazo de un año los excedentes a que tienen derecho ni hubieren presentado solicitud de ingreso a las cooperativas, los montos correspondientes

se aplicarán a los fondos de reserva o de educación cooperativa, según lo determinen las bases constitutivas de dichas sociedades.

Artículo 26

Las sociedades cooperativas de consumidores podrán dedicarse a actividades de abastecimiento y distribución, ahorro y préstamos, así como a la prestación de servicios relacionados con la educación o la obtención de vivienda.
(VER NOTA AL INICIO DE LA LEY)

Artículo 27

Son sociedades cooperativas de productores, aquéllas cuyos miembros se asocien para trabajar en común en la producción de bienes y/o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual. Independientemente del tipo de producción a la que estén dedicadas, estas sociedades podrán almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos, actuando en los términos de esta Ley.

Artículo 28

Los rendimientos anuales que reporten los balances de las sociedades cooperativas de productores, se repartirán de acuerdo con el trabajo aportado por cada socio durante el año, tomando en cuenta que el trabajo puede evaluarse a partir de los siguientes factores: calidad, tiempo, nivel técnico y escolar.

Artículo 29

En las sociedades cooperativas de productores cuya complejidad tecnológica lo amerite, deberán haber una Comisión Técnica, integrada por el personal técnico que designe el Consejo de Administración y por un delegado de cada una de las áreas de trabajo en que podrá estar dividida la unidad productora. Las funciones de la Comisión Técnica se definirán en las bases constitutivas.

Artículo 30

Se establecen las siguientes categorías de sociedades cooperativas:

I.- Ordinarias, y

II.- De participación estatal. Para tal efecto, el Estado podrá dar en concesión o administración bienes o servicios a las sociedades cooperativas, en los términos que señalen las leyes respectivas.

Artículo 31

Son sociedades cooperativas ordinarias, las que para funcionar requieren únicamente de su constitución legal.

Artículo 32

Son sociedades cooperativas de participación estatal, las que se asocien con autoridades federales, estatales o municipales, para la explotación de unidades productoras o de servicios públicos, dados en administración, o para financiar proyectos de desarrollo económico a niveles local, regional o nacional.

Artículo 33

Las sociedades cooperativas que tengan por objeto realizar actividades de ahorro y préstamo se regirán por esta Ley, así como por lo dispuesto por la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

CAPITULO III

Del funcionamiento y la administración

Artículo 34

La dirección, administración y vigilancia interna de las sociedades cooperativas estará a cargo de:

- I.- La Asamblea General;
- II.- El Consejo de Administración;
- III.- El Consejo de Vigilancia, y
- IV.- Las comisiones que esta Ley establece y las demás que designe la Asamblea General.

Artículo 35

La Asamblea General es la autoridad suprema y sus acuerdos obligan a todos los socios, presentes, ausentes y disidentes, siempre que se hubieren tomado conforme a esta Ley y a las bases constitutivas.

Artículo 36

La Asamblea General resolverá todos los negocios y problemas de importancia para la sociedad cooperativa y establecerá las reglas generales que deben normar el funcionamiento social. Además de las facultades que le conceden la presente Ley y las bases constitutivas, la Asamblea General conocerá y resolverá de:

- I.- Aceptación, exclusión y separación voluntaria de socios;
- II.- Modificación de las bases constitutivas;
- III.- Aprobación de sistemas y planes de producción, trabajo, distribución, ventas y financiamiento;
- IV.- Aumento o disminución del patrimonio y capital social;
- V.- Nombramiento y remoción, con motivo justificado, de los miembros del Consejo de Administración y de Vigilancia; de las comisiones especiales y de los especialistas contratados;
- VI.- Examen del sistema contable interno;
- VII.- Informes de los consejos y de las mayorías calificadas para los acuerdos que se tomen sobre otros asuntos;
- VIII.- Responsabilidad de los miembros de los consejos y de las comisiones, para el efecto de pedir la aplicación de las sanciones en que incurran, o efectuar la denuncia o querrela correspondiente;
- IX.- Aplicación de sanciones disciplinarias a socios;
- X.- Reparto de rendimientos, excedentes y percepción de anticipos entre socios, y
- XI.- Aprobación de las medidas de tipo ecológico que se propongan.

Los acuerdos sobre los asuntos a que se refiere este artículo, deberán tomarse por mayoría de votos en la Asamblea General. En las bases constitutivas se podrán establecer los asuntos en que se requiera una mayoría calificada.

Artículo 37

Las asambleas generales ordinarias o extraordinarias, deberán ser convocadas en los términos de la fracción X del artículo 16 de esta Ley, con por lo menos 7 días naturales de anticipación. La convocatoria deberá ser exhibida en un lugar visible del domicilio social de la sociedad cooperativa, misma que deberá contener la respectiva orden del día; también será difundida a través del órgano local más adecuado, dando preferencia al periódico, cuando exista en el lugar del domicilio social de la cooperativa. De tener filiales en lugares distintos, se difundirá también en esos lugares. Se convocará en forma directa por escrito a cada socio, cuando así lo determine la Asamblea General.

Si no asistiera el suficiente número de socios en la primera convocatoria, se convocará por segunda vez con por lo menos 5 días naturales de anticipación en los mismos términos y podrá celebrarse en este caso, con el número de socios que concurran, siendo válidos los acuerdos que se tomen, siempre y cuando estén apegados a esta Ley y a las bases constitutivas de la sociedad cooperativa.

Artículo 38

Serán causas de exclusión de un socio:

I.- Desempeñar sus labores sin la intensidad y calidad requeridas;

II.- La falta de cumplimiento en forma reiterada a cualquiera de sus obligaciones establecidas en las bases constitutivas, sin causa justificada, e

III.- Infringir en forma reiterada las disposiciones de esta Ley, de las bases constitutivas o del reglamento de la sociedad cooperativa, las resoluciones de la Asamblea General o los acuerdos del Consejo de Administración o de sus gerentes o comisionados.

Al socio que se le vaya a sujetar a un proceso de exclusión, se le notificará por escrito en forma personal, explicando los motivos y fundamentos de esta determinación, concediéndole el término de 20 días naturales para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga ante el Consejo de Administración o ante la Comisión de Conciliación y Arbitraje si existiere, de conformidad con las disposiciones de las bases constitutivas o del reglamento interno de la sociedad cooperativa.

Cuando un socio considere que su exclusión ha sido injustificada, podrá ocurrir a los órganos jurisdiccionales que señala el artículo 9 de esta Ley.

Artículo 39

Las bases constitutivas pueden autorizar el voto por carta poder otorgada ante dos testigos debiendo recaer en todo caso la representación, en un coasociado, sin que éste pueda representar a más de dos socios.

Artículo 40

Cuando los miembros pasen de quinientos o residan en localidades distintas a aquélla en que deba celebrarse la asamblea, ésta podrá efectuarse con delegados socios, elegidos por cada una de las áreas de trabajo. Los delegados deberán designarse para cada asamblea y cuando representen áreas foráneas, llevarán mandato expreso por escrito sobre los distintos asuntos que contenga la convocatoria y teniendo tantos votos como socios representen. Las bases constitutivas fijarán el procedimiento para que cada sección o zona de trabajo designe en una asamblea a sus delegados.

Artículo 41

El Consejo de Administración será el órgano ejecutivo de la Asamblea General y tendrá la representación de la sociedad cooperativa y la firma social, pudiendo designar de entre los socios o personas no asociadas, uno o más gerentes con la facultad de representación que se les asigne, así como uno o más comisionados que se encarguen de administrar las secciones especiales.

Artículo 42

El nombramiento de los miembros del Consejo de Administración lo hará la Asamblea General conforme al sistema establecido en esta Ley y en sus bases constitutivas. Sus faltas temporales serán suplidas en el orden progresivo de sus designaciones, pudiendo

durar en sus cargos, si la Asamblea General lo aprueba hasta cinco años y ser reelectos cuando por lo menos las dos terceras partes de la Asamblea General lo apruebe.

Artículo 43

El Consejo de Administración estará integrado por lo menos, por un presidente, un secretario y un vocal.

Tratándose de sociedades cooperativas que tengan diez o menos socios, bastará con que se designe un administrador.

Los responsables del manejo financiero requerirán de aval solidario o fianza durante el período de su gestión.

Artículo 44

Los acuerdos sobre la administración de la sociedad, se deberán tomar por mayoría de los miembros del Consejo de Administración. Los asuntos de trámite o de poca trascendencia los despacharán los miembros del propio Consejo, según sus funciones y bajo su responsabilidad, debiendo dar cuenta del uso de esta facultad en la próxima reunión de Consejo.

Artículo 45

El Consejo de Vigilancia estará integrado por un número impar de miembros no mayor de cinco con igual número de suplentes, que desempeñarán los cargos de presidente, secretario y vocales, designados en la misma forma que el Consejo de Administración y con la duración que se establece en el artículo 42 de esta Ley.

En el caso de que al efectuarse la elección del Consejo de Administración se hubiere constituido una minoría que represente, por lo menos un tercio de la votación de los asistentes a la asamblea, el Consejo de Vigilancia será designado por la minoría.

Los miembros de las comisiones establecidas por esta Ley y las demás que designe la Asamblea General, durarán en su cargo el mismo tiempo que los de los Consejos de Administración y Vigilancia.

Tratándose de sociedades cooperativas que tengan diez o menos socios, bastará con designar un comisionado de vigilancia.

Artículo 46

El Consejo de Vigilancia ejercerá la supervisión de todas las actividades de la sociedad cooperativa y tendrá el derecho de veto para el solo objeto de que el Consejo de Administración reconsidere las resoluciones vetadas. El derecho de veto deberá ejercitarse ante el presidente del Consejo de Administración, en forma verbal e implementarse inmediatamente por escrito dentro de las 48 horas siguientes a la resolución de que se trate. Si fuera necesario, en los términos de esta Ley y de su reglamento interno, se convocará dentro de los 30 días siguientes, a una Asamblea General extraordinaria para que se aboque a resolver el conflicto.

Artículo 47

En todas las sociedades cooperativas que esta Ley menciona, será obligatoria la educación cooperativa y la relativa a la economía solidaria. Para tal efecto, se definirán en la Asamblea General los Programas y estrategias a realizar.

Artículo 48

Las sociedades cooperativas tendrán las áreas de trabajo que sean necesarias para la mejor organización y expansión de su actividad cooperativa.

CAPITULO IV

Del Régimen Económico

Artículo 49

El capital de las sociedades cooperativas se integrará con las aportaciones de los socios y con los rendimientos que la Asamblea General acuerde se destinen para incrementarlo, además de considerar lo establecido en el artículo 63 de esta Ley.

Artículo 50

Las aportaciones podrán hacerse en efectivo, bienes derechos o trabajo; estarán representadas por certificados que serán nominativos, indivisibles y de igual valor, las cuales deberán actualizarse anualmente.

La Valorización de las aportaciones que no sean en efectivo, se hará en las bases constitutivas o al tiempo de ingresar el socio por acuerdo entre éste y el Consejo de Administración, con la aprobación de la Asamblea General en su momento.

El socio podrá transmitir los derechos patrimoniales que amparan sus certificados de aportación, en favor del beneficiario que designe para el caso de su muerte. Las bases constitutivas de la sociedad cooperativa, determinarán los requisitos para que también se le puedan conferir derechos cooperativos al beneficiario.

Artículo 51

Cada socio deberá aportar por lo menos el valor de un certificado. Se podrá pactar la suscripción de certificados excedentes o voluntarios por los cuales se percibiera el interés que fije el Consejo de Administración de acuerdo con las posibilidades económicas de la sociedad cooperativa, tomando como referencia las tasas que determinen los bancos para depósitos a plazo fijo.

Al constituirse la sociedad cooperativa o al ingresar el socio a ella, será obligatoria la exhibición del 10% cuando menos, del valor de los certificados de aportación.

Artículo 52

Cuando la Asamblea General acuerde reducir el capital que se juzgue excedente, se hará la devolución a los socios que posean mayor número de certificados de aportación o a prorrata si todos son poseedores de un número igual de certificados. Cuando el acuerdo sea en el sentido de aumentar el capital, todos los socios quedarán obligados a suscribir el aumento en la forma y términos que acuerdo sea en el sentido de aumentar el capital todos los socios quedarán obligados a suscribir el aumento en la forma y término que acuerde la Asamblea General.

Artículo 53

Las sociedades cooperativas podrán constituir los siguientes fondos sociales:

- I.- De Reserva;
- II.- De Previsión Social, y
- III.- De Educación Cooperativa.

Artículo 54

El Fondo de Reserva se constituirá con el 10 al 20% de los rendimientos que obtengan las sociedades cooperativas en cada ejercicio social.

Artículo 55

El Fondo de Reserva podrá ser delimitado en las bases constitutivas, pero no será menor del 25% del capital social en las sociedades cooperativas de productores y del 10% en las

de consumidores. Este fondo podrá ser afectado cuando lo requiera la sociedad para afrontar las pérdidas o restituir el capital de trabajo, debiendo de ser reintegrado al final del ejercicio social, con cargo a los rendimientos.

Artículo 56

El Fondo de Reserva de las sociedades cooperativas será manejado por el Consejo de Administración con la aprobación del Consejo de Vigilancia y podrá disponer de él, para los fines que se consignan en el artículo anterior.

Artículo 57

El Fondo de Previsión Social no podrá ser limitado; deberá destinarse a reservas para cubrir los riesgos y enfermedades profesionales y formar fondos de pensiones y haberes de retiro de socios, primas de antigüedad y para fines diversos que cubrirán: gastos médicos y de funeral, subsidios por incapacidad, becas educacionales para los socios o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga.

Al inicio de cada ejercicio, la Asamblea General fijará las prioridades para la aplicación de este Fondo de conformidad con las perspectivas económicas de la sociedad cooperativa.

Las prestaciones derivadas del Fondo de Previsión Social, serán independientes de las prestaciones a que tengan derecho los socios por su afiliación a los sistemas de seguridad social.

Las sociedades cooperativas en general, deberán de afiliarse obligatoriamente a sus trabajadores, y socios que aporten su trabajo personal, a los sistemas de seguridad social, e instrumentar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, así como de capacitación y adiestramiento, gozando del beneficio expresado en los artículos 116 y 179 de la Ley del Seguro Social.

Artículo 58

El Fondo de Previsión Social se constituirá con la aportación anual del porcentaje, que sobre los ingresos netos, sea determinado por la Asamblea General y se aplicará en los términos del artículo anterior. Este porcentaje podrá aumentarse según los riesgos probables y la capacidad económica de la sociedad cooperativa.

Artículo 59

El Fondo de Educación Cooperativa será constituido con el porcentaje que acuerde la Asamblea General, pero en todo caso dicho porcentaje no será inferior al 1% de los excedentes netos del mes.

Artículo 60

Las sociedades cooperativas, podrán recibir de personas físicas y morales, públicas o privadas, nacionales o internacionales, donaciones, subsidios, herencias y legados para aumentar su patrimonio.

Artículo 61

Los excedentes de cada ejercicio social anual son la diferencia entre activo y pasivo menos la suma del capital social, las reservas y los rendimientos acumulados de años anteriores, los cuales se consignarán en el balance anual que presentará el Consejo de Administración a la Asamblea General. Igual procedimiento se observará si el balance mencionado reporta pérdidas.

Artículo 62

Cada año las sociedades cooperativas podrán revaluar sus activos, en los términos legales correspondientes. La Asamblea General determinará con relación a los incrementos, el porcentaje que se destinará al incremento al capital social y el que se aplicará a las reservas sociales.

Artículo 63

Las sociedades cooperativas podrán emitir certificados de aportación para capital de riesgo por tiempo determinado.

CAPITULO V **De los socios**

Artículo 64

Esta Ley y las bases constitutivas de cada sociedad cooperativa, determinarán deberes, derechos, aportaciones, causas de exclusión de socios y demás requisitos. En todo caso, deberán observarse las siguientes disposiciones:

- I.- La obligación de consumir o de utilizar los servicios que las sociedades cooperativas de consumidores brindan a sus socios;
- II.- En las sociedades cooperativas de productores, la prestación del trabajo personal de los socios podrá ser físico, intelectual o de ambos géneros;
- III.- Las sanciones a los socios de las sociedades cooperativas cuando no concurren a las asambleas generales, juntas o reuniones que establece la presente Ley; éstas deberán considerar las responsabilidades y actividades propias de la mujer;
- IV.- Las sanciones contra la falta de honestidad de socios y dirigentes en su conducta o en el manejo de fondos que se les hayan encomendado;
- V.- Los estímulos a los socios que cumplan cabalmente con sus obligaciones, y
- VI.- La oportunidad de ingreso a las mujeres, en particular a las que tengan bajo su responsabilidad a una familia.

Artículo 65

Las sociedades cooperativas de productores podrán contar con personal asalariado, únicamente en los casos siguientes:

- I.- Cuando las circunstancias extraordinarias o imprevistas de la producción o los servicios lo exijan;
- II.- Para la ejecución de obras determinadas;
- III.- Para trabajos eventuales o por tiempo determinado o indeterminado, distintos a los requeridos por el objeto social de la sociedad cooperativa;
- IV.- Para la sustitución temporal de un socio hasta por seis meses en un año, y
- V.- Por la necesidad de incorporar personal especializado altamente calificado.

Cuando la sociedad requiera por necesidades de expansión admitir a más socios, el Consejo de Administración tendrá la obligación de emitir una convocatoria para tal efecto, teniendo preferencia para ello, sus trabajadores, a quienes se les valorará por su antigüedad, desempeño, capacidad y en su caso por su especialización.

Ante una inconformidad en la selección, el afectado podrá acudir ante la Comisión de Conciliación y Arbitraje de la propia sociedad cooperativa si es que la hay, la que deberá resolverle por escrito en un término no mayor de 20 días naturales, independientemente de poder ejercer la acción legal que corresponda.

CAPITULO VI **De la disolución y liquidación**

Artículo 66

Las sociedades cooperativas se disolverán por cualquiera de las siguientes causas:

- I.- Por la voluntad de las dos terceras partes de los socios;
- II.- Por la disminución de socios a menos de cinco;
- III.- Porque llegue a consumarse su objeto;
- IV.- Porque el estado económico de la sociedad cooperativa no permita continuar las operaciones, y
- V.- Por la resolución ejecutoriada dictada por los órganos jurisdiccionales que señala el artículo 9 de esta ley.

Artículo 67

En el caso de que las sociedades cooperativas deseen constituirse en otro tipo de sociedad, deberán disolverse y liquidarse previamente.

Artículo 68

Los órganos jurisdiccionales que señala el artículo 9 de esta Ley, conocerán de la liquidación de las sociedades cooperativas.

Artículo 69

En un plazo no mayor de treinta días después de que los liquidadores hayan tomado posesión de su cargo, presentarán a los órganos jurisdiccionales a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, un proyecto para la liquidación de la sociedad cooperativa.

Artículo 70

Los órganos jurisdiccionales a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, resolverán dentro de los diez días hábiles siguientes sobre la aprobación del proyecto.

Artículo 71

Los órganos jurisdiccionales a que se refiere el artículo 9 de esta Ley y los liquidadores, que serán considerados como parte en el proceso de liquidación, vigilarán que los Fondos de Reserva y de Previsión Social y en general el activo de la sociedad cooperativa disuelta tengan su aplicación conforme a esta Ley.

Artículo 72

En los casos de quiebra o suspensión de pagos de las sociedades cooperativas, los órganos jurisdiccionales que señala el artículo 9 aplicarán la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos.

Artículo 73

Cuando dos o más sociedades cooperativas se fusionen para integrar una sola, la sociedad fusionante que resulte de la fusión, tomará a su cargo los derechos y obligaciones de las fusionadas.

Para la fusión de varias sociedades cooperativas se deberá seguir el mismo trámite que esta Ley establece para su constitución.

TITULO TERCERO

CAPITULO I

De los organismos cooperativos

Artículo 74

Las sociedades cooperativas se podrán agrupar libremente en federaciones, uniones o en cualquier otra figura asociativa con reconocimiento legal.

Las disposiciones establecidas por esta Ley para las sociedades cooperativas, serán aplicables a los organismos cooperativos, salvo lo señalado en los artículos: 2; 11 fracción V; 25; 27; 28; 36 fracciones IX y X; 37 párrafo segundo; 38 fracción I; 43 párrafo segundo; 46 párrafo cuarto; 50 párrafo tercero; 53; 54; 57; 58; 59; 64 fracción II, 65 y 66 fracción II.

Las federaciones podrán agrupar a sociedades cooperativas de la misma rama de la actividad económica. Las uniones podrán agrupar a sociedades de distintas ramas de la actividad económica.

Artículo 75

Las confederaciones nacionales se podrán constituir con varias uniones o federaciones de por lo menos diez entidades federativas.

Artículo 76

El Consejo Superior del Cooperativismo es el órgano integrador del Movimiento Cooperativo Nacional; se constituirá con las confederaciones nacionales y con las instituciones u organismos de asistencia técnica al cooperativismo.

Artículo 77

Independientemente de las asambleas generales de las confederaciones nacionales cooperativas, se celebrará cada dos años un Congreso Nacional Cooperativo, al que convocará el Consejo Superior del Cooperativismo.

Artículo 78

Las sociedades cooperativas determinarán las funciones de las federaciones y de las uniones; éstas a su vez, las de las confederaciones nacionales. Las funciones del Consejo Superior del Cooperativismo, serán definidas por sus integrantes, de acuerdo con esta Ley.

En sus bases constitutivas, que cumplirán con los aspectos a que se refiere el artículo 16 de esta Ley, se podrán incluir las siguientes funciones:

- I.- Producir bienes y/o servicios;
- II.- Coordinar y defender los intereses de sus afiliados;
- III.- Servir de conciliadores y árbitros cuando surjan conflictos entre sus agremiados. Sus resoluciones tendrán carácter definitivo, cuando las partes hayan convenido por escrito de común acuerdo en someterse a esa instancia.
- IV.- Promover y realizar los planes económicos sociales;
- V.- Promover acciones de apoyo ante las instituciones gubernamentales;
- VI.- Apoyar la celebración de cursos de educación cooperativa en todos los niveles;
- VII.- Procurar la solidaridad entre sus miembros, y
- VIII.- Contratar trabajadores y/o integrar personal comisionado de los organismos integrantes, en los términos en que se acuerde.

CAPITULO II

De los organismos e instituciones de asistencia técnica al Movimiento Cooperativo Nacional

Artículo 79

Se consideran organismos o instituciones de asistencia técnica al Movimiento Cooperativo Nacional, todos aquéllos cuya estructura jurídica no tenga un fin de especulación, político o religioso y en cuyo objeto social o actividades, figuren programas, planes o acciones de asistencia técnica a los organismos cooperativos que esta Ley establece.

Artículo 80

A los organismos e instituciones de asistencia técnica al Movimiento Cooperativo Nacional les corresponderá, entre otras funciones, impulsar y asesorar al propio movimiento cooperativo.

Las sociedades cooperativas podrán contratar los servicios de estos organismos o instituciones de asistencia técnica al Movimiento Cooperativo Nacional, en materia de:

I.- Asistencia técnica y asesoría económica, financiera, contable, fiscal, organizacional, administrativa, jurídica, tecnológica y en materia de comercialización;

II.- Capacitación y adiestramiento al personal directivo, administrativo y técnico de dichas sociedades;

III.- Formulación y evaluación de proyectos de inversión para la constitución o ampliación de las actividades productivas, y

IV.- Elaboración de estudios e investigaciones sobre las materias que incidan en el desarrollo de los organismos cooperativos.

Artículo 81

La afiliación de los organismos citados en el artículo anterior al Consejo Superior del Cooperativismo, será voluntaria.

En caso de ser aceptados, tendrán derecho a voz, pero no a voto.

Artículo 82

El Consejo Superior del Cooperativismo organizará el levantamiento y actualización de un padrón de organismos de asistencia técnica al Movimiento Cooperativo Nacional.

CAPITULO III

De la integración

Artículo 83

Todos los organismos mencionados en el Capítulo I del presente Título, podrán realizar las operaciones que sean necesarias y convenientes para dar cumplimiento cabal a su ciclo económico y deberán establecer planes

económico-sociales entre los de su rama o con otras ramas de cooperativas, con el fin de realizar plenamente su objeto social o lograr mayor expansión en sus actividades.

Artículo 84

Los planes económicos mencionados en el artículo anterior, podrán referirse entre otras actividades, a intercambios o aprovechamientos de servicios, adquisiciones en común, financiamientos a proyectos concretas, impulso a sus ventas, realización de obras en común, adquisiciones de maquinaria y todo aquello que tienda a un mayor desarrollo de los organismos cooperativos.

Artículo 85

En el mismo sentido de integración, los organismos cooperativos citados, deberán hacer planes sociales y de carácter educativo y cultural, que ayuden a consolidar la solidaridad y eleven el nivel cultural de sus miembros.

Artículo 86

Los organismos cooperativos habrán de diseñar y poner en operación estrategias de integración de sus actividades y procesos productivos, con la finalidad de:

- I.- Acceder a las ventajas de las economías de escala;
- II.- Abatir costos;
- III.- Incidir en precios;
- IV.- Estructurar cadenas de producción y comercialización;
- V.- Crear unidades de producción y de comercialización, y
- VI.- Realizar en común cualquier acto de comercio, desarrollo tecnológico o cualquier actividad que propicie una mayor capacidad productiva y competitiva de los propios organismos cooperativos.

Artículo 87

(Se deroga).

Artículo 88

Las sociedades cooperativas, uniones, federaciones y confederaciones, podrán efectuar operaciones libremente ya sea en forma individual o en conjunto. El Consejo Superior del Cooperativismo y en su caso las autoridades respectivas, darán toda la orientación y apoyo necesario para esta clase de operaciones.

Artículo 89

Los organismos cooperativos deberán colaborar en los planes económicos-sociales que realicen los gobiernos Federal, Estatal o Municipal y que beneficien o impulsen de manera directa el desarrollo cooperativo.

TITULO CUARTO

CAPITULO UNICO

Del apoyo a las sociedades cooperativas

Artículo 90

Los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, apoyarán a las escuelas, institutos y organismos especializados en educación cooperativa que establezca el Movimiento Cooperativo Nacional. Asimismo, apoyarán la labor que en este sentido realicen las universidades o instituciones de educación superior en el país.

Artículo 91

todos los actos relativos a la constitución y registro de la sociedades cooperativas citados en esta Ley, estarán exentos de impuestos y derechos fiscales de carácter federal. Para este efecto, la autoridad competente expedirá las resoluciones fiscales que al efecto procedan.

Artículo 92

En los programas económicos o financieros de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, que incidan en la actividad cooperativa mexicana, se deberá tomar en cuenta la opinión, según sea el caso de las federaciones, uniones, confederaciones nacionales y del Consejo Superior del Cooperativismo.

Artículo 93

Los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, apoyarán, en el ámbito territorial a su cargo y en la medida de sus posibilidades, al desarrollo del cooperativismo.

Artículo 94

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá de común acuerdo con el Consejo Superior del Cooperativismo, con las confederaciones, federaciones y uniones, constituir los fondos de garantía de origen federal que apoyarán a las sociedades cooperativas en su acceso al crédito, mediante el otorgamiento de garantías que cubran el riesgo de los proyectos de inversión.

Las sociedades nacionales de crédito podrán efectuar descuentos a las instituciones de crédito para el otorgamiento en favor de las sociedades cooperativas, de créditos para la formulación y ejecución de proyectos de inversión, que incluyan los costos de los servicios de asesoría y asistencia técnica.

Para la evaluación de la procedencia de los descuentos, las sociedades nacionales de crédito deberán considerar primordialmente la demostración de la factibilidad y rentabilidad de los proyectos de inversión, la solidez de la organización y la presentación y desarrollo de los planes económicos y operacionales de los organismos cooperativos.

TRANSITORIOS

Artículo Primero

La presente Ley entrará en vigor a los treinta días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo

Se abrogan la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 1938, el Reglamento de la citada ley publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de julio del mismo año, el Reglamento del Registro Cooperativo Nacional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto del mismo año, y el Acuerdo por el que se crea con el carácter de permanente la Comisión Intersecretarial para el Fomento Cooperativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo de 1978.

Artículo Tercero

Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan a lo dispuesto por la presente ley.

Artículo Cuarto

A elección de los interesados, los asuntos relativos al registro de sociedades cooperativas y demás que estén en trámite, se podrán continuar hasta su terminación de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas que se abroga, o cancelarse y, en caso procedente, iniciarse ante el Registro Público de Comercio.

México, D.F., a 13 de julio de 1994. - Dip. Miguel González Avelar, Presidente- Sen. Ricardo Monreal Avila, Presidente.- Dip. José Raúl Hernández Avila, Secretario. - Sen. Oscar Ramírez Mijares, Secretario.- Rúbricas.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de julio de mil novecientos noventa y

cuatro. - Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Jorge Carpizo. - Rúbrica.

TRANSITORIOS de la reforma 4 de junio de 2001

Artículo Primero

El artículo Primero del presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo señalado en los artículos Transitorios siguientes. El artículo Segundo del presente Decreto entrará en vigor a los dos años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El artículo Tercero del presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción del artículo 26 contenido en el mismo, el cual entrará en vigor a los dos años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo

Las Sociedades de Ahorro y Préstamo, las Uniones de Crédito y las Sociedades Cooperativas que tengan intención de sujetarse a los términos establecidos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, deberán registrarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en un término no mayor a seis meses contados a partir de la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación, manifestando al efecto su nombre, denominación, domicilio, número de socios y demás datos que sobre su actividad solicite dicho organismo.

Artículo Tercero

Las Sociedades de Ahorro y Préstamo, las Uniones de Crédito que capten depósitos de ahorro, así como las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y aquéllas que cuenten con secciones de ahorro y préstamo, constituidas con anterioridad al inicio de la vigencia de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, contarán con un plazo de dos años a partir de la fecha que establece el primer párrafo del artículo PRIMERO Transitorio anterior para solicitar de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la autorización para operar como Entidad, sujetándose a lo dispuesto por el artículo OCTAVO Transitorio y debiendo obtener el dictamen favorable de alguna Federación, con arreglo a lo dispuesto por la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Concluido el plazo anterior, las sociedades y las Uniones de Crédito que no hubieren obtenido la autorización referida deberán abstenerse de captar recursos, en caso contrario se ubicarán en los supuestos de infracción previstos por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y por las disposiciones que resulten aplicables.

Artículo Cuarto

Las Sociedades de Ahorro y Préstamo y las Uniones de Crédito que capten depósitos de ahorro continuarán sujetas a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en términos de lo establecido en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, hasta en tanto no se sujeten a lo señalado en el artículo.

TERCERO Transitorio.

Artículo Quinto

Los Organismos de Integración que sean autorizados conforme a la Ley de Ahorro y Crédito Popular dentro del plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la misma,

contarán con un plazo de dos años a partir de su autorización, para cumplir con el número mínimo de diez Entidades y cinco Federaciones afiliadas, en términos del artículo 53 de la misma ley, según se trate.

Artículo Sexto

Sin menoscabo de lo establecido en el artículo 5o. de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, el Gobierno Federal podrá entregar recursos a los Fondos de Protección conforme se integren las Entidades a los mismos y en función del monto de los ahorradores de las Entidades. Dicha aportación será por única vez y a través de los mecanismos que para tal efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los recursos a que hace referencia el párrafo anterior, no serán aplicables a las Entidades señaladas en el quinto párrafo del artículo 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Artículo Séptimo

Las Entidades autorizadas en los primeros dos años a partir de la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, podrán utilizar los recursos del Fondo de Protección, siempre y cuando hayan realizado aportaciones durante un plazo de 2 años.

Respecto de aquéllas que se constituyan con posterioridad a los dos primeros años de entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, podrán utilizar los recursos del Fondo de Protección a partir del cuarto año siguiente a la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Lo dispuesto en este artículo deberá incluirse en el contrato de fideicomiso de los Fondos de Protección. Las Entidades deberán informar a sus Socios, Clientes y al público en general la fecha a partir de la cual iniciará la vigencia del sistema del Fondo de Protección respectivo, conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

Artículo Octavo

Para efectos de la fracción I del artículo 53 de la misma Ley, las Federaciones que soliciten su autorización dentro de un plazo de dos años contados a partir de la entrada en vigor de la Ley, deberán presentar los documentos en que, a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se manifieste la intención de cuando menos diez sociedades que cumplan con los requisitos del artículo 10o., con excepción de las fracciones II y IX, para afiliarse a dicha Federación.

Artículo Noveno

A partir de la fecha de inicio de vigencia establecida en el primer párrafo del artículo PRIMERO Transitorio, las Federaciones autorizadas administrarán de forma provisional los Fondos de Protección, hasta que dichas Federaciones formen parte de alguna Confederación autorizada o convengan con alguna de ellas el traspaso de los recursos que integran dichos fondos en los términos del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Concluido un plazo de dos años a partir del inicio de vigencia de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, las Federaciones que no se encuentren en los supuestos contemplados en el párrafo anterior, podrán solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores una prórroga que no podrá exceder de dos años para continuar administrando el Fondo de Protección de sus Entidades, de lo contrario se ubicarán en la causal de revocación prevista por la fracción IX del artículo 60 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. En este último caso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con arreglo a las disposiciones de carácter general que emita al efecto, determinará el destino de los recursos que integran los Fondos de Protección respectivos.

Artículo Décimo

Al momento de instalarse el primer consejo de administración de una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo conforme a los términos previstos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se determinarán por insaculación a los consejeros electos por la asamblea que fungirán en su encargo únicamente durante la primera mitad del periodo de duración determinado por la Entidad, a fin de proceder en periodos subsecuentes a la renovación por mitad del consejo de administración.

Cuando el número de integrantes sea impar, se elegirá por insaculación durante la instalación del consejo de administración, al miembro excedente que formará parte de la primera mitad, a fin de proceder en periodos subsecuentes a la renovación parcial del mismo. En el caso del consejo de vigilancia, se procederá de la misma forma.

Artículo Décimo Primero

Para efectos de lo dispuesto en los artículos 65 y 101 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se establecerá un periodo de transición a efecto de que los Organismos de Integración se ajusten al mismo, conforme a lo siguiente:

I. Durante los dos primeros años a partir de que obtengan el dictamen favorable, su consejo de administración podrá estar conformado hasta en un setenta y cinco por ciento del total de sus miembros, por consejeros o funcionarios de la Entidad, Federación o Confederación, según sea el caso, y

II. A partir del segundo año y hasta el final del tercer año, dicho porcentaje se reducirá hasta un cincuenta por ciento y a partir del cuarto año este porcentaje podrá ser hasta de un treinta por ciento.

Artículo Décimo Segundo

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomará las medidas pertinentes y proveerá lo necesario en términos de las disposiciones aplicables, para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros estén en posibilidad de cumplir con las funciones conferidas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Artículo Décimo Tercero

Las solicitudes de autorización presentadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para constituir y operar Sociedades de Ahorro y Préstamo, y que no hayan sido resueltas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se entenderán resueltas en sentido negativo, por lo que los interesados correspondientes podrán iniciar el procedimiento para obtener la autorización a que se refiere el artículo 9o. de la misma Ley.

Las solicitudes a que hace referencia el párrafo anterior serán devueltas a los interesados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de un plazo que no excederá de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Décimo Cuarto

Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores contará con un plazo de ciento ochenta días naturales para emitir la resolución a que se refiere el artículo 9 de la Ley

citada, respecto de las solicitudes de autorización para operar como Entidad que le sean remitidas por las Federaciones.

Artículo Décimo Quinto

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores contará con un plazo de 180 días naturales contados a partir de la publicación de este Decreto para emitir todas las reglas y disposiciones de carácter general que deban ser formuladas según se señala en la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Artículo Décimo Sexto

Se derogan todas las disposiciones que se opongan a esta Ley.

México, D.F., a 30 de abril de 2001.- Dip. Ricardo García Cervantes, Presidente.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Manuel Medellín Milán, Secretario.- Sen. Yolanda González Hernández, Secretaria.- Rúbricas".

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil uno.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.

• LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR

TEXTO VIGENTE

(Nueva Ley 04/06/2001)

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 junio de 2001.

LEY de Ahorro y Crédito Popular.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

SE EXPIDE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO Y DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS.

LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR.

TÍTULO PRIMERO

Disposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 1

La presente Ley tiene por objeto:

- I. Regular, promover y facilitar el servicio de captación de recursos y colocación de crédito por parte de las entidades de ahorro y crédito popular; la organización y funcionamiento de las Federaciones y Confederaciones en que aquéllas voluntariamente se agrupen;
- II. Regular las actividades y operaciones que las entidades de ahorro y crédito popular podrán realizar con el propósito de lograr su sano y equilibrado desarrollo;
- III. Proteger los intereses de quienes celebren operaciones con dichas entidades, y
- IV. Establecer los términos en que las autoridades financieras ejercerán la supervisión del Sistema de Ahorro y Crédito Popular.

Esta Ley es de orden público y observancia general en todo el territorio nacional. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será el órgano competente para interpretar a efectos administrativos los preceptos de la presente Ley y, en general, para todo cuanto se refiera a los sujetos de la misma.

Artículo 2

El Sistema de Ahorro y Crédito Popular estará integrado por las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las sociedades financieras populares que sean dictaminadas favorablemente por una Federación y autorizadas para operar como entidades de ahorro y crédito popular, en los términos de esta Ley; por las Federaciones que estén autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para ejercer las funciones de supervisión auxiliar de las entidades referidas, así como por las Confederaciones autorizadas por la propia Comisión para que administren sus respectivos fondos de protección.

Artículo 3

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

- I. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
- II. Comisión, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;
- III. Entidad, en singular o plural, a las personas autorizadas para que operen como Entidades de Ahorro y Crédito Popular en los términos de esta Ley;
- IV. Cooperativa, en singular o plural, a las sociedades constituidas y que operen conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas y a esta Ley, que tengan por objeto realizar exclusivamente operaciones de ahorro y préstamo;
- V. Sociedades Financieras Populares, en plural o singular, a las sociedades anónimas constituidas y que operen conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles y a esta Ley;
- VI. Fondo de Protección, en singular o plural, a los sistemas de protección que se constituyan de conformidad con lo señalado en el Título Tercero de esta Ley, con el propósito de procurar cubrir a los ahorradores sus depósitos de dinero en los términos y con las limitaciones señalados en el mismo.
- VII. Organismo de Integración, en singular o plural, a las Federaciones y Confederaciones autorizadas por la Comisión, para ejercer de manera auxiliar la supervisión de las Entidades y para administrar el Fondo de Protección a que se refiere esta Ley, respectivamente;
- VIII. Socios, a las personas que participen en el capital social de las Entidades;
- IX. Clientes, a las personas físicas y morales que utilizan los servicios que prestan las Sociedades Financieras Populares;
- X. Comité Técnico, al comité técnico correspondiente al Fondo de Protección a que se refiere esta Ley;

XI. Comité de Supervisión, al órgano de las Federaciones encargado de ejercer la supervisión auxiliar de las Entidades en términos de esta Ley, y
XII. Nivel de Operaciones, al nivel de operaciones asignado, de entre cuatro niveles, por la Comisión a la Entidad, de conformidad con esta Ley y con las reglas de carácter general que emita la propia Comisión.

Artículo 4

Las Entidades tendrán por objeto el ahorro y crédito popular; facilitar a sus miembros el acceso al crédito; apoyar el financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas y, en general, propiciar la solidaridad, la superación económica y social, y el bienestar de sus miembros y de las comunidades en que operan, sobre bases educativas, formativas y del esfuerzo individual y colectivo.

Se entenderá como ahorro y crédito popular la captación de recursos en los términos de esta Ley provenientes de los Socios o Clientes de las Entidades, mediante actos causantes de pasivo directo o, en su caso contingente, quedando la Entidad obligada a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados, así como la colocación de dichos recursos hecha entre los Socios o Clientes.

Artículo 5

Las operaciones que realicen las Entidades, únicamente estarán respaldadas por los Fondos de Protección con los límites y en los términos previstos en el Título Tercero de esta Ley, por lo que el Gobierno Federal y las entidades de la Administración Pública Paraestatal no podrán responsabilizarse ni garantizar el resultado de las operaciones que realicen las Entidades ni los Organismos de Integración, así como tampoco asumir responsabilidad alguna respecto del cumplimiento de las obligaciones contraídas con sus Socios o Clientes.

Artículo 6

Las palabras Entidad de Ahorro y Crédito Popular, Sociedad de Ahorro y Préstamo, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, Sociedad Financiera Popular, caja popular, caja de ahorro u otras que expresen ideas semejantes en cualquier idioma, sólo podrán ser usadas en la denominación de las Entidades que se autoricen para operar en los términos de esta Ley. Se exceptúa de la aplicación de lo anterior, a las Federaciones y Confederaciones autorizadas en los términos de esta Ley.

Las cajas de ahorro a que hace mención la legislación laboral, no estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley.

Artículo 7

Para efectos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito, se considerará a las Entidades como intermediarios financieros, por lo que queda prohibida a cualquiera otra persona física o moral distintas a las señaladas en la citada fracción I del artículo 103, la captación de recursos del público de manera directa o indirecta en el territorio nacional, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, obligándose a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados.

Artículo 8

En lo no previsto por la presente Ley, a los sujetos de la misma se les aplicarán en el orden siguiente:

I. La Ley General de Sociedades Cooperativas, únicamente para las Cooperativas y en todo lo que no se oponga a la presente Ley;

- II. La legislación mercantil;
- III. El Código Civil Federal;
- IV. Los usos y prácticas imperantes entre las Entidades;
- V. El Código Fiscal de la Federación para efectos de las notificaciones a que se refiere esta Ley, y
- VI. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo en sus Títulos Tercero A, referente a la mejora regulatoria, y Sexto, relativo al recurso de revisión.

TÍTULO SEGUNDO

De la Organización y Funcionamiento de las Entidades

Capítulo I

Disposiciones Comunes

Artículo 9

Se requerirá dictamen favorable de una Federación y autorización de la Comisión, para la organización y funcionamiento de las Entidades. Por su propia naturaleza las autorizaciones serán intransmisibles.

Para obtener la autorización de la Comisión para operar como Entidad, las solicitudes deberán presentarse ante una Federación, quien elaborará un dictamen respecto de la procedencia de la solicitud.

La Comisión resolverá las solicitudes de autorización que se acompañen del dictamen favorable de la Federación respectiva. Las Federaciones remitirán a la Comisión las solicitudes, acompañando su dictamen y a su vez la Comisión entregará su resolución a través de dichas Federaciones.

Tratándose de aquellas sociedades que opten por el régimen de no afiliadas, podrán acudir directamente ante la Comisión, a efecto de que ésta designe a la Federación que se encargará de emitir el dictamen correspondiente, y en caso de ser favorable, encargarse de su supervisión auxiliar, continuando con el procedimiento señalado en el párrafo anterior.

En caso de que la sociedad reciba un dictamen desfavorable de la Federación, podrá solicitar la revisión de éste ante la misma Federación. De ratificarse el dictamen desfavorable, la sociedad podrá solicitar la revisión de su solicitud ante la Comisión quien deberá resolver sobre la misma. Las sociedades contarán con un plazo de quince días hábiles a partir de la fecha en que se les notifique la ratificación del dictamen desfavorable, para presentar directamente a la Comisión dicha solicitud de revisión.

Las Federaciones contarán con un plazo de noventa días naturales para elaborar su dictamen y la Comisión contará con un plazo de ciento veinte días naturales para emitir resolución respecto de las solicitudes de autorización que le hayan sido presentadas. Dichos plazos comenzarán a contar, respectivamente, a partir de la fecha en que sean presentadas las

solicitudes a las Federaciones y recibidas éstas por la Comisión con toda la información y documentación a que se refiere el artículo 10.

Se entenderá que la Comisión resuelve en sentido afirmativo la solicitud de autorización acompañada por el dictamen favorable de una Federación, si no comunica lo contrario a la sociedad, a través de la Federación correspondiente, dentro del periodo mencionado. Asimismo, se entenderá que la Comisión resuelve en sentido negativo la solicitud de autorización presentada directamente por una sociedad que hubiera obtenido un dictamen desfavorable, si no comunica lo contrario a la sociedad dentro del periodo mencionado.

Cualquier requerimiento de información o documentación que realice la Comisión a la Federación o sociedad, suspenderá el cómputo del plazo con el que cuenta la Comisión

para emitir su resolución. Dicho plazo comenzará a computarse nuevamente a partir de que se reciba la información o documentación requerida.

Las autorizaciones, así como las modificaciones a las mismas deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación del ámbito geográfico en que vaya a operar. Las Entidades a las que se asigne el Nivel de Operaciones I estarán exceptuadas de la publicación en los periódicos de amplia circulación.

La Federación en su dictamen propondrá a la Comisión el Nivel de Operaciones que podrá asignarse, en su caso, a la sociedad. Cuando la Comisión otorgue la autorización referida, clasificará a la Entidad asignándole uno de entre cuatro niveles de operación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de esta Ley. Para que la Entidad cambie de Nivel de Operaciones se requerirá de la aprobación de la Comisión, previo dictamen de la Federación con quien tenga celebrado el contrato de afiliación o supervisión auxiliar.

Artículo 10

La solicitud de autorización deberá acompañarse de lo siguiente:

I. El proyecto de estatutos o bases constitutivas, que deberán apegarse a las disposiciones y mecanismos que la presente

Ley establece y en el que deberá indicarse el número de socios;

II. Las recomendaciones de dos Entidades;

III. El programa general de operación, que permita a la Comisión evaluar si la sociedad podrá cumplir adecuadamente con su objeto. Dicho programa deberá contener, por lo menos:

a) Las regiones y plazas en las que pretenda operar;

b) Un estudio de viabilidad financiera y organizacional de la sociedad;

c) Las bases para la aplicación de excedentes o dividendos, y en su caso, para su distribución, y

d) Las bases relativas a su organización y control interno.

IV. La relación de socios fundadores y monto de su aportación, así como de probables administradores, principales directivos y personas que integrarán los órganos a que se refiere esta Ley;

V. La indicación del capital social mínimo fijo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116 de esta Ley, así como la propuesta de Nivel de Operaciones que le asignará la Comisión;

VI. El acreditar la solvencia económica de la sociedad, debiendo comprobar fehacientemente su capacidad para cumplir con la regulación prudencial que establece esta Ley de acuerdo al Nivel de Operaciones que se proponga;

VII. El acreditar la solvencia moral y económica de los principales funcionarios de conformidad con el Nivel de Operaciones que se proponga y las reglas de carácter general que emita la Comisión;

VIII. El proyecto de contrato de afiliación o de supervisión auxiliar, que en su caso, celebrará la sociedad con una Federación, incluyendo la aceptación por parte de ésta para celebrarlo. Los citados contratos deberán contemplar la estipulación relativa a la aplicación de penas convencionales por parte de las Federaciones respectivas;

IX. La aceptación de una Confederación para que la Entidad participe en el Fondo de Protección administrado por aquélla, o en su caso, la información sobre el sistema de protección a los ahorradores a que se refiere el último párrafo del artículo 105, y

X. La demás documentación e información que a juicio de la Federación se requiera para tal efecto, así como la que en su caso establezca la Comisión mediante disposiciones de carácter general.

Cualquier modificación a la escritura constitutiva de la Entidad y a sus estatutos o bases constitutivas, deberá ser sometida al previo dictamen favorable de la Federación correspondiente, en términos del contrato de afiliación o supervisión auxiliar, según sea el caso. Una vez obtenido, en su caso, el dictamen favorable de la Federación, lo remitirá junto con la solicitud a la aprobación de la Comisión.

La escritura o sus reformas, aprobada por la Comisión, deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio del domicilio social correspondiente, debiendo exhibirse el testimonio respectivo dentro de un término de ciento veinte días naturales contados a partir de la fecha en que haya sido autorizada.

En ningún momento la denominación de la Entidad podrá formarse con el nombre, palabras, siglas o símbolos que la identifique con socios o partidos políticos.

Artículo 11

La admisión y retiro de Socios, se realizará de conformidad con lo dispuesto en los estatutos o bases constitutivas de la Entidad, informándose en todo caso al consejo de administración.

Las Cooperativas en sus estatutos o bases constitutivas deberán prever que los Socios podrán solicitar su retiro de la Entidad en cualquier tiempo, siempre y cuando no existan operaciones activas pendientes, en cuyo caso deberán liquidarlas previamente, así como que dichos Socios no podrán solicitar el retiro de sus aportaciones si con ello la Cooperativa incumple con las disposiciones aplicables relativas al capital social mínimo fijo o al índice de capitalización que deba mantener.

Artículo 12

Las Entidades deberán constituir los fondos sociales siguientes:

I. De reserva, y

II. De obra social.

Las Cooperativas además deberán constituir un fondo de educación cooperativa.

Artículo 13

El fondo de reserva deberá constituirse por lo menos con el diez por ciento de los excedentes tratándose de Cooperativas, o de las utilidades por lo que se refiere a las Sociedades Financieras Populares, que se obtengan en cada ejercicio social, hasta alcanzar un monto equivalente a, por lo menos, el diez por ciento del capital contable de la Entidad.

Dicho fondo deberá estar invertido en valores gubernamentales de amplia liquidez y sólo podrá ser afectado cuando lo requiera la Entidad para afrontar pérdidas o restituir, en su caso, el capital de trabajo, debiendo ser reintegrado en ejercicios subsecuentes con cargo a los excedentes o utilidades. Se entiende por capital de trabajo a la diferencia entre activos y pasivos a plazo menor de un año.

Artículo 14

El fondo de obra social se constituirá con la aportación anual que resulte de aplicar el porcentaje que sobre los excedentes o utilidades, en su caso, sea determinado por la asamblea general y se aplicará en los términos del artículo siguiente.

El fondo de obra social que se constituya conforme a este artículo, será administrado por el consejo de administración de la Entidad. Dicho consejo deberá elaborar un informe anual sobre la realización de obras sociales, el cual se integrará al informe anual de la Entidad que será hecho del conocimiento de su asamblea y de la Secretaría.

Artículo 15

El fondo de obra social se destinará a la realización de obras sociales y adicionalmente en el caso de las Cooperativas, podrá destinarse a reservas para cubrir los riesgos y enfermedades profesionales y formar fondos de pensiones y haberes de retiro de Socios, primas de antigüedad y para fines diversos que cubrirán: gastos médicos y de funeral, subsidios por incapacidad, becas educativas para los Socios y sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga en los términos que establezcan las bases constitutivas y sus estatutos.

Al inicio de cada ejercicio la asamblea ordinaria de la Entidad, fijará las prioridades para la aplicación de este fondo, de conformidad con las perspectivas económicas de la Entidad.

Artículo 16

Las Entidades contarán, cuando menos, con lo siguiente:

- I. Asamblea general;
- II. Consejo de administración;
- III. Consejo de vigilancia o comisario;
- IV. Comité de crédito o su equivalente, y
- V. Un director o gerente general.

La Comisión, de acuerdo a los criterios que determine en reglas de carácter general, podrá exceptuar a las Entidades de lo señalado en la fracción IV, dependiendo del Nivel de Operaciones asignado y del índice de capitalización con el que cuenten.

Artículo 17

La asamblea ordinaria de las Entidades conocerá de todos los asuntos que le corresponda conforme a la ley y a los estatutos sociales o bases constitutivas que las rijan, pero será facultad exclusiva de la asamblea extraordinaria decidir sobre los asuntos siguientes:

- I. Aumento o disminución del valor de los certificados de aportación o de las acciones, en su caso;
- II. Remoción y sustitución por causas extraordinarias de los miembros del consejo de administración y de vigilancia que deban ser designados por la asamblea;
- III. Modificación de estatutos sociales o bases constitutivas, y
- IV. Fusión, escisión, transformación o disolución de la Entidad.

Las decisiones de la asamblea extraordinaria serán tomadas por el voto en el mismo sentido del setenta y cinco por ciento de:

- a) cuando menos, la mitad más uno de los Socios tratándose de las Cooperativas, y
- b) del capital social, en el caso de las Sociedades Financieras Populares.

A las asambleas deberá acudir con voz pero sin voto un representante de la Federación que la supervise de manera auxiliar.

Será nulo todo acuerdo tomado en asamblea ordinaria o extraordinaria que contraviniendo las sanas prácticas financieras o las condiciones prevalecientes en el mercado, tenga como propósito provocar un deterioro en la condición financiera de la Entidad.

Artículo 18

El consejo de administración de las Entidades estará integrado por no menos de cinco personas ni más de quince.

Para el caso de las Cooperativas, los consejeros fungirán por un periodo máximo de hasta cinco años con posibilidad de una sola reelección y deberá ser electo el cincuenta por ciento de los miembros del consejo cada mitad del periodo que en su caso determine la Entidad. En caso de que el consejo esté integrado por un número impar de personas,

éstos serán electos de acuerdo a lo que determine la Cooperativa en sus bases constitutivas tomando en consideración lo antes señalado.

Lo señalado en el párrafo anterior, no se aplicará a consejeros que representen personas físicas en las Sociedades Financieras Populares.

Artículo 19

Las Entidades a través de su asamblea, podrán designar consejeros independientes para que participen en los trabajos del consejo de administración, en igualdad de circunstancias que el resto de los consejeros.

Se entenderá por consejero independiente a la persona que sea ajena a la administración de la Entidad, y que reúna los requisitos y condiciones que determine la Comisión, mediante disposiciones de carácter general.

Artículo 20

Los consejeros de la Entidad deberán reunir los requisitos siguientes:

- I. Acreditar conocimientos y experiencia en materia financiera y administrativa;
- II. No tener alguno de los impedimentos señalados en el artículo siguiente, y
- III. Los demás que esta Ley, la asamblea o los estatutos o bases constitutivas de la Entidad determinen.

Artículo 21

En ningún caso podrán ser consejeros de Entidades:

- I. Las personas que desempeñen simultáneamente otro cargo en la Entidad de que se trate, así como en otras Entidades;
- II. Las personas inhabilitadas para ejercer el comercio;
- III. Las personas sentenciadas por delitos intencionales patrimoniales;
- IV. Las personas que tengan litigio pendiente con la Entidad;
- V. Las personas que hayan sido inhabilitadas para ejercer cualquier cargo, comisión o empleo en el servicio público Federal, Estatal o Municipal, en el Sistema Financiero Mexicano, en el Sistema de Ahorro y Crédito Popular o conforme a esta Ley;
- VI. El cónyuge o las personas que tengan parentesco por consanguinidad hasta el primer grado, afinidad hasta el segundo grado, o civil con el director o gerente general de la Entidad, o con alguno de los miembros del consejo de vigilancia o comisario de la misma;
- VII. Cualquier persona que celebre con la Entidad, directa o indirectamente, contratos de obras, servicios, suministros o cualquier otro de naturaleza análoga, o que participen en empresas con las que la Entidad, celebre cualquiera de los actos antes señalados, y
- VIII. Cualquier persona que desempeñe un cargo público, de elección popular o dirigencia partidista.

Los mismos impedimentos se aplicarán, cuando corresponda, a los casos de Federaciones y Confederaciones.

La Comisión, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá exceptuar a las Entidades del Nivel de Operaciones I, de cumplir con el requisito señalado en la fracción VIII anterior, por lo que se refiere al desempeño de un cargo público.

Artículo 22

Son facultades y obligaciones indelegables del consejo de administración:

- I. Establecer las políticas generales de administración de la Entidad, así como las políticas para otorgamiento de crédito;
- II. Acordar la creación de los comités que sean necesarios para el correcto desarrollo de las operaciones de la Entidad;

- III. Autorizar los reglamentos que propongan los comités respectivos y los que el propio consejo determine;
- IV. Instruir la elaboración y aprobar los manuales de administración y operación, así como los programas de actividades;
- V. Autorizar las operaciones que, de acuerdo a los estatutos o bases constitutivas de la Entidad y por su monto o importancia, necesiten tal autorización;
- VI. En su caso, aprobar y hacer del conocimiento de la asamblea general los estados financieros del ejercicio;
- VII. Informar a la asamblea sobre los resultados de su gestión;
- VIII. Atender las observaciones por irregularidades detectadas por el consejo de vigilancia o comisario;
- IX. Nombrar al director o gerente general y acordar su remoción, en este último caso previa opinión del consejo de vigilancia, de acuerdo al procedimiento que establezcan los estatutos o bases constitutivas de la Entidad;
- X. Otorgar poderes generales o especiales al director o gerente general;
- XI. Autorizar los contratos que las Entidades celebren con las empresas o sociedades con las que tengan nexos patrimoniales en los términos de las disposiciones de carácter general que emita la Comisión, o tengan el control administrativo conforme a lo señalado en el artículo 53 fracción I, y
- XII. Las demás que esta Ley, la asamblea o los estatutos o bases constitutivas de la Entidad determinen.

Artículo 23

El director o gerente general de la Entidad, deberá reunir los requisitos siguientes:

- I. Tener conocimientos y experiencia de por lo menos tres años en materia financiera y administrativa, con excepción de las Entidades con Nivel de Operaciones I, en cuyo caso, deberán acreditar conocimientos en materia financiera y administrativa a satisfacción de la Federación;
- II. No tener alguno de los impedimentos que para ser consejero señala el artículo 21, y
- III. Los demás que esta Ley, la asamblea o los estatutos o bases constitutivas de la Entidad determinen.

Artículo 24

Son facultades del director o gerente general:

- I. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del consejo de administración y de los comités de la Entidad, y
- II. Las demás que esta Ley, la asamblea o los estatutos o bases constitutivas de la Entidad determinen.

Artículo 25

El director o gerente general tendrá las siguientes obligaciones:

- I. Ejecutar las políticas establecidas por el consejo de administración, por el comité de crédito o su equivalente y los demás comités operativos que se establezcan en la Entidad, actuando en todo momento con apego a los estatutos o bases constitutivas de la misma y a la normatividad aplicable;
- II. Preparar y proponer el presupuesto de cada ejercicio;
- III. Informar mensualmente de la situación financiera de la Entidad al consejo de administración;
- IV. Presentar al consejo de administración, para su aprobación, los estados financieros que deban ser aprobados por el mismo;

- V. Representar a la Entidad en los actos que determine el consejo de administración;
- VI. Aplicar los reglamentos y manuales operativos;
- VII. Llevar y mantener actualizados los libros y registros contables y sociales de la Entidad, y
- VIII. Las demás que esta Ley, la asamblea o los estatutos o bases constitutivas de la Entidad determinen.

Artículo 26

El comité de crédito o su equivalente, o las personas que éstos autoricen al efecto, serán los encargados de analizar, y en su caso, aprobar las solicitudes de crédito que presenten a la Entidad los Socios o Clientes, así como las condiciones en que éstos se otorguen, de acuerdo a las políticas que apruebe el consejo de administración.

Dicho comité estará integrado por no menos de tres personas ni más de siete, que serán designadas y aprobadas por el

consejo de administración. Éstos no deberán tener alguno de los impedimentos que para ser consejero señala el artículo

21, a excepción de la fracción I, siempre y cuando no exista conflicto de interés.

Artículo 27

Los miembros del comité de crédito o su equivalente, en su caso, serán removidos de su cargo a propuesta del director o gerente general y/o por acuerdo del consejo de administración.

El consejo de administración emitirá los reglamentos y manuales operativos a los cuales deberá ajustarse el comité de crédito o su equivalente.

Artículo 28

El consejo de vigilancia o comisario será el encargado de supervisar el funcionamiento interno de la Entidad y el cumplimiento de sus estatutos, políticas, lineamientos y de las disposiciones aplicables. Tratándose del consejo de vigilancia, estará integrado por no menos de tres personas ni más de siete nombradas y removidas por la asamblea general, las cuales no deberán tener alguno de los impedimentos que para ser consejero señala el artículo 21. Las mismas restricciones serán aplicables en el caso del comisario.

Para el caso de las Cooperativas, los consejeros fungirán por un periodo de hasta cinco años con posibilidad de una sola reelección y deberá ser electo el cincuenta por ciento de los miembros del consejo cada mitad del periodo que en su caso determine la Entidad. En caso de que el consejo esté integrado por un número impar de personas, éstos serán electos de

acuerdo a lo que determine la Cooperativa en sus bases constitutivas tomando en consideración lo antes señalado. Las mismas restricciones serán aplicables en el caso del comisario.

Artículo 29

Son facultades del consejo de vigilancia o comisario:

- I. Asistir con voz, pero sin voto a las sesiones del consejo de administración;
- II. Solicitar al consejo de administración, al director o gerente general o a los comités de la Entidad, la información que requiera para el correcto desempeño de sus funciones;
- III. Para las Entidades ubicadas en el Nivel de Operaciones que establezca la Comisión en las reglas de carácter general, solicitar al auditor externo nombrado, la información sobre el desarrollo y resultados de la auditoría;
- IV. Convocar a asamblea ordinaria y/o extraordinaria a falta de convocatoria expedida por el consejo de administración;

V. Proponer la remoción del director o gerente general, o en su caso, emitir la opinión a que se refiere la fracción IX del artículo 22, y

VI. Las demás que esta Ley, la asamblea o los estatutos o bases constitutivas de la Entidad determinen.

Artículo 30

Son obligaciones del consejo de vigilancia o comisario:

I. Vigilar que los actos de todos los órganos de la Entidad se realicen con apego a los estatutos o bases constitutivas de la misma y a la normatividad aplicable;

II. Presentar a la asamblea un informe anual sobre su gestión y la del consejo de administración, del director o gerente general y de los comités que la Entidad establezca;

III. Informar a la asamblea de la Entidad y al Comité de Supervisión de la Federación sobre las irregularidades detectadas en la operación de los órganos de gobierno de la Entidad;

IV. Supervisar que las observaciones efectuadas se atiendan y las irregularidades detectadas se corrijan; V. En su caso, recomendar a la asamblea y justificar la aceptación o rechazo de los estados financieros del ejercicio y del informe del consejo de administración, y

VI. Las demás que esta Ley, la asamblea o los estatutos o bases constitutivas de la Entidad determinen.

Artículo 31

Las Entidades deberán verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en esta Ley, por parte de las personas que sean designadas como consejeros, miembros del consejo de vigilancia o comisario y director o gerente general, con anterioridad al inicio de sus gestiones. La Comisión podrá establecer, mediante disposiciones de carácter general, criterios relativos a los requisitos que las citadas personas estén obligadas a cumplir y lineamientos para su debido acreditamiento, así como para la integración de la documentación comprobatoria relativa.

En todo caso, las personas a que se refiere el párrafo anterior deberán manifestar por escrito a la Entidad de que se trate y bajo protesta de decir verdad, que no se ubican en alguno de los supuestos a que se refieren el artículo 21.

Las Entidades deberán informar a la Comisión la designación de nuevos consejeros, miembros del consejo de vigilancia o comisario, director o gerente general, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su designación.

Tratándose de consejeros, miembros del consejo de vigilancia o comisario, director o gerente general, la Comisión tendrá la facultad de veto.

Artículo 32

La Comisión expedirá las reglas de carácter general para el funcionamiento de las Entidades, en las que se determinarán las operaciones activas, pasivas y de servicios que éstas podrán realizar de acuerdo al Nivel de Operaciones que les sea asignado, así como las características de dichas operaciones y los requisitos para celebrarlas. Las reglas generales que

establezcan los criterios para asignar el Nivel de Operaciones de cada Entidad deberán considerar entre otros elementos, el monto de activos y pasivos de la Entidad; el número de Socios o Clientes; el ámbito geográfico de las operaciones; y la capacidad técnica y operativa de la Entidad.

Las Entidades que se ubiquen en el Nivel de Operaciones IV que establezca la Comisión, estarán obligadas a llevar a cabo un programa de auditoría legal en los términos que

indique la propia Comisión mediante disposiciones de carácter general, debiendo proporcionar a la Federación el dictamen de su auditor legal externo.

Artículo 33

Las Entidades no podrán celebrar operaciones en las que se pacten condiciones y términos que se aparten significativamente de las prácticas del mercado que de manera general aplican las Entidades del mismo tipo, ni tampoco podrán otorgar créditos distintos de los que correspondan a su objeto social o al Nivel de Operaciones que les hubiere asignado la Comisión.

Los intereses de las operaciones pasivas a cargo de las Entidades que no tengan fecha de vencimiento, y que en el transcurso de cinco años, contados a partir del último movimiento del Socio o Cliente, no hayan tenido movimientos por retiros o depósitos y con un saldo que no exceda del equivalente a una vez el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal elevado al año, podrán ser abonados en una cuenta global que llevará la Entidad para ese efecto.

Cumplido el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, cuando el Socio o Cliente se presente para actualizar su estado de cuenta o realice un depósito o retiro, la Entidad deberá retirar de la cuenta global los intereses devengados, a efecto de abonarlos a su cuenta y de acuerdo con la parte proporcional que le corresponda, actualizando el saldo a la fecha.

Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses a que se refiere este artículo, sin movimiento en el transcurso de cinco años contados a partir de que estos últimos se abonen en la cuenta global, cuyo importe conjunto por operación no sea superior al equivalente de trescientos días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, prescribirán a favor del patrimonio de la Entidad.

Los contratos en los que se hagan constar los créditos que otorguen las Entidades, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por el consejo de administración de la Entidad, serán títulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito.

El estado de cuenta certificado por el contador a que se refiere este artículo, hará fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los deudores.

Artículo 34

Las Entidades en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al Cliente, depositante, deudor, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder para disponer de los recursos ahorrados o para intervenir en la operación o servicio, salvo en los casos en que proporcionen información a las Federaciones en términos de esta Ley, así como en los casos previstos en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Artículo 35

Las Entidades requerirán del acuerdo de, por lo menos, las tres cuartas partes de los consejeros que estén presentes en las sesiones del consejo de administración, para aprobar la celebración de operaciones con personas relacionadas.

Serán operaciones con personas relacionadas, las celebradas por las Entidades en las que resulten o puedan resultar deudores de las mismas, las personas que se indican a continuación:

- I. Las personas físicas o morales que posean directa o indirectamente el control del dos por ciento o más de los títulos representativos del capital de la Entidad de que se trate, de acuerdo al registro de Socios más reciente;
- II. Los miembros del consejo de administración de la Entidad;
- III. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco con las personas señaladas en las fracciones anteriores;
- IV. Las personas distintas a los funcionarios o empleados que con su firma puedan obligar a la Entidad;
- V. Las personas morales, así como los consejeros y funcionarios de éstas, en las que la Entidad posea directa o indirectamente el control del diez por ciento o más de los títulos representativos de su capital, y
- VI. Las personas morales en las que cualesquiera de las personas señaladas en las fracciones anteriores, así como los funcionarios, comisarios, los ascendientes y descendientes en primer grado, así como sus cónyuges, posean directa o indirectamente el control del diez por ciento o más de los títulos representativos de su capital.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por:

- a) Parentesco.- al que existe por consanguinidad y afinidad en línea recta en primer grado, y por consanguinidad y afinidad en línea colateral en segundo grado o civil.
- b) Funcionarios.- al director o gerente general y a los funcionarios que ocupen cargos con la jerarquía inmediata inferior a la de aquél.

Las operaciones con personas relacionadas cuyo importe en su conjunto no exceda de cien mil unidades de inversión o el uno por ciento del capital social pagado de la Entidad, el que sea menor, a otorgarse en favor de una misma persona física o moral o grupo de personas físicas o morales que por sus nexos patrimoniales o de responsabilidad, constituyan riesgos comunes para una Entidad, no requerirán de la aprobación del consejo de administración, sin embargo, deberán hacerse de su conocimiento y poner a su disposición toda la información relativa a las mismas.

La suma total de los montos dispuestos y las líneas de crédito irrevocables contratadas de las operaciones con personas relacionadas, no podrá exceder del cincuenta por ciento del capital social pagado incluidas las reservas de capital y los remanentes o utilidades acumulados de la Entidad.

La Comisión emitirá disposiciones de carácter general para establecer la forma y términos en que deberán ser aprobadas las operaciones con personas relacionadas.

Artículo 36

Las Entidades, dependiendo del Nivel de Operaciones que les sea asignado, podrán realizar las operaciones siguientes:

- I. Recibir depósitos a la vista, de ahorro, a plazo y retirables en días preestablecidos;
Las anteriores operaciones se podrán realizar con menores de edad, siempre y cuando éstos actúen a través de sus representantes legales en términos de la legislación común aplicable;
- II. Recibir préstamos y créditos de instituciones de crédito nacionales o extranjeras, fideicomisos de fomento y organismos e instituciones financieras internacionales, así como de sus proveedores nacionales y extranjeros;
- III. Otorgar a las Entidades afiliadas a su Federación, previa aprobación del consejo de administración de ésta y con cargo a sus excedentes de capital, préstamos de liquidez, mismos que deberán descontar de su capital, debiendo sujetarse a los requisitos y condiciones que mediante reglas de carácter general establezca la Comisión;
- IV. Recibir créditos de las Federaciones a las que se encuentren afiliadas, en términos del artículo 52, fracción III;

- V. Celebrar, como arrendatarias, contratos de arrendamiento financiero sobre equipos de cómputo, transporte y demás que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto social, y adquirir los bienes que sean objeto de tales contratos;
- VI. Celebrar como arrendatarias, contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles para la consecución de su objeto;
- VII. Prestar su garantía en términos del artículo 92 de esta Ley;
- VIII. Recibir o emitir órdenes de pago y transferencias en moneda nacional. Las mismas operaciones en moneda extranjera podrán realizarse únicamente para abono en cuenta en moneda nacional. En todos los casos, las Entidades tendrán prohibido asumir posiciones en moneda extranjera;
- IX. Descontar, dar en garantía o negociar títulos de crédito, y afectar los derechos provenientes de los contratos de financiamiento que realicen con sus Socios o Clientes o de las operaciones autorizadas con las personas de las que reciban financiamiento;
- X. Realizar, por cuenta de sus Socios o Clientes, operaciones con empresas de factoraje financiero;
- XI. Emitir títulos de crédito, en serie o en masa, para su colocación entre el gran público inversionista;
- XII. Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos, a través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito;
- XIII. Otorgar descuentos de toda clase, reembolsables a plazos congruentes con los de las operaciones pasivas que celebren;
- XIV. Constituir depósitos a la vista o a plazo en instituciones de crédito;
- XV. Otorgar préstamos o créditos a sus Socios o Clientes, sujetos a plazos y montos máximos;
- XVI. Realizar inversiones en valores;
- XVII. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto y enajenarlos cuando corresponda;
- XVIII. Otorgar créditos de carácter laboral a sus trabajadores;
- XIX. Realizar inversiones permanentes en otras sociedades mercantiles, siempre y cuando les presten servicios auxiliares, complementarios o de tipo inmobiliario;
- XX. Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente;
- XXI. Actuar como representante común de los tenedores de títulos de crédito;
- XXII. Celebrar, como arrendador, contratos de arrendamiento financiero;
- XXIII. Recibir donativos;
- XXIV. Prestar servicios de caja de seguridad;
- XXV. Ofrecer el servicio de abono y descuento en nómina;
- XXVI. Fungir como receptor de pago de servicios por cuenta de terceros, siempre que lo anterior no implique para la Entidad la aceptación de obligaciones directas o contingentes;
- XXVII. Expedir y operar tarjetas de débito;
- XXVIII. Prestar servicios de caja y tesorería, y
- XXIX. Realizar la compra-venta de divisas por cuenta de terceros.

La Comisión podrá autorizar a las Entidades la realización de operaciones análogas o conexas a las señaladas en este artículo, incluyendo el otorgamiento de garantías a que se refiere el artículo 92 de esta Ley.

Las Entidades únicamente podrán recibir depósitos de los Gobiernos Federal, Estatales o Municipales, ya sea a través de sus sectores central o paraestatal, cuando se ubiquen en los Niveles de Operaciones III y IV y obtengan autorización de la Comisión.

Las Entidades tendrán prohibido recibir en garantía de los préstamos que otorguen a sus Socios, sus acciones o certificados de aportación, según se trate.

En ningún caso las Entidades podrán autorizar a sus Socios o Clientes la expedición de cheques a su cargo, en los términos que dispone el Título Primero Capítulo IV de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Asimismo, a las Entidades les estará prohibido realizar aquellas operaciones que no les estén expresamente autorizadas.

Artículo 37

La Comisión, después de haber escuchado la opinión de la Federación respectiva y previa audiencia de la Entidad interesada, podrá declarar la revocación de la autorización otorgada de conformidad con el artículo 9o., según corresponda, en los casos siguientes:

I. Si no presenta el testimonio de la escritura o bases constitutivas para su aprobación a que se refiere el artículo 10, fracción I, dentro del término de noventa días hábiles a partir de que haya sido otorgada la autorización, o bien, si no inicia sus operaciones dentro de los noventa días hábiles siguientes a partir de la aprobación de dicho testimonio, o al darse esta última no estuviere pagado el capital mínimo de la Entidad;

II. Si no acredita a la Comisión la celebración de un contrato de afiliación o de supervisión auxiliar con una Federación en los términos de esta Ley, así como si no mantiene vigentes dichos contratos;

III. Si no acredita a la Comisión la adhesión al Fondo de Protección respectivo, o bien, la constitución del sistema de protección a que se refiere el último párrafo del artículo 105;

IV. Si la Entidad genera pérdidas que la ubiquen por debajo de su capital mínimo;

La Comisión podrá establecer un plazo que no será menor de sesenta días hábiles ni mayor de noventa días hábiles, para que se reintegre el capital en la cantidad necesaria para mantener la operación de la Entidad dentro de los límites legales;

V. Cuando el número de Socios llegare a ser inferior al fijado como mínimo en esta Ley y en las disposiciones aplicables;

VI. Si efectúa operaciones en contravención a lo dispuesto por esta Ley o por las disposiciones que de ella emanen, o si sus actividades se apartan de las sanas prácticas de los mercados en que opera, o si abandona o suspende sus actividades;

VII. Si reiteradamente, a pesar de las observaciones de la Federación respectiva, o en su caso de la Comisión, la Entidad ejecuta operaciones distintas a las permitidas, no mantiene las proporciones legales de activo y capitalización, no se ajusta a la regulación prudencial aplicable, o bien, si a juicio de la Comisión no cumple adecuadamente con las funciones para las que fue autorizada, o por poner en peligro con su administración los intereses de sus Socios o Clientes, o de su objeto social, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley;

VIII. Cuando por causas imputables a la Entidad, no aparezcan debida y oportunamente registradas en su contabilidad las operaciones que haya efectuado;

IX. Si la Entidad se niega reiteradamente a proporcionar información, o bien, de manera dolosa, presenta información falsa, imprecisa o incompleta a la Federación respectiva o a la Comisión;

X. Si la Entidad obra sin autorización de la Comisión, en los casos en que la Ley así lo exija;

XI. Si se disuelve, liquida o quiebra;

XII. En caso de que no realice tres aportaciones mensuales al Fondo de Protección en un plazo de un año, y

XIII. En cualquier otro establecido por la Ley.

La declaración de revocación se inscribirá en el Registro Público de Comercio que corresponda al domicilio social de la Entidad de que se trate y se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación del ámbito geográfico en que operaba.

La revocación incapacitará a la Entidad de que se trate para realizar sus operaciones a partir de la fecha en que se notifique la misma y se pondrá en estado de disolución y liquidación sin necesidad del acuerdo de la asamblea de Socios.

La Comisión podrá promover ante la autoridad judicial para que designe al liquidador, si en el plazo de sesenta días hábiles de publicada la revocación no hubiere sido designado.

Cuando la propia Comisión encuentre que existe imposibilidad de llevar a cabo la liquidación de la Entidad, podrá hacerlo del conocimiento del juez competente para que ordene la cancelación de su inscripción en el Registro Público de Comercio, la que surtirá sus efectos transcurridos ciento ochenta días hábiles a partir del mandamiento judicial. Los interesados podrán oponerse a esta cancelación dentro del citado plazo de sesenta días hábiles, ante la propia autoridad judicial.

Capítulo II

De las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

Artículo 38

La constitución de las Cooperativas se llevará a cabo con arreglo a lo dispuesto en el Título Segundo Capítulo I de la Ley General de Sociedades Cooperativas, con excepción de lo siguiente:

I. El acta constitutiva y sus modificaciones, deberán ser protocolizadas únicamente ante notario o corredor público;

II. Las Cooperativas contarán con personalidad jurídica, patrimonio propio y podrán celebrar actos jurídicos a partir de la inscripción de su acta constitutiva en el Registro Público de Comercio que corresponda a su domicilio social;

III. El número mínimo de Socios no será menor de cien para las Entidades con Nivel de Operaciones I, y de doscientos para las Entidades con Nivel de Operaciones II a IV, y

IV. Podrán participar como Socios personas morales, con excepción de las Instituciones Financieras a que se refiere el artículo 43 de esta Ley. En todo caso, dichas personas morales únicamente podrán emitir un voto en la asamblea de Socios de la Cooperativa de que se trate, salvo en el caso de la institución fundadora a que se refiere el artículo 40 de esta Ley.

Artículo 39

De manera alternativa a lo establecido por la Ley General de Sociedades Cooperativas, las Cooperativas podrán establecer en sus bases constitutivas la participación de delegados electos por los Socios para que asistan a las asambleas a que se refiere la presente Ley, en representación de los propios Socios. El sistema para la elección de delegados que al efecto se establezca, deberá garantizar la representación de todos los Socios de manera proporcional, pudiendo para tal efecto agrupar en zonas a sus sucursales u otras unidades operativas.

Artículo 40

La Cooperativa podrá integrar a una institución fundadora, la cual tendrá como finalidad apoyarla financieramente y participar de manera permanente en sus órganos de administración y gobierno. No podrán participar en tales órganos las instituciones que realicen actividades políticas partidistas.

La institución fundadora estará conformada como una persona moral sin fin de lucro; estará representada en la asamblea general y en el consejo de administración por un número de votos que no podrá ser mayor al quince por ciento del total, y en el comité de vigilancia por un número de votos que no será mayor al treinta por ciento del total, y no podrá recibir préstamos por parte de la Cooperativa.

Las aportaciones que realice la institución fundadora al capital social de la Cooperativa se harán a título de donación, y deberán ser destinadas a una reserva especial, misma que no podrá ser distribuida entre los Socios. En ningún momento la Cooperativa podrá reembolsar dichas aportaciones a la institución fundadora.

En caso de que la Cooperativa llegara a liquidarse y existan remanentes, deberán destinarse al Fondo de Protección de la Confederación que corresponda.

Capítulo III

De las Sociedades Financieras Populares

Artículo 41

Las Sociedades Financieras Populares serán sociedades anónimas, tendrán duración indefinida y establecerán su domicilio en territorio nacional, pudiendo prestar servicios tanto a sus Socios como a sus Clientes, en los términos que esta Ley establece. Sólo podrán utilizar esta denominación las sociedades autorizadas para operar en los términos de esta Ley.

Cuando se trate de sociedades de capital variable, el capital mínimo obligatorio con arreglo a esta Ley, estará integrado por acciones sin derecho a retiro. El monto del capital variable en ningún caso podrá ser superior al del capital pagado sin derecho a retiro.

Artículo 42

El capital mínimo de las Sociedades Financieras Populares deberá estar íntegramente suscrito y pagado al momento de iniciar operaciones, o a más tardar dentro de los noventa días hábiles siguientes a la aprobación por parte de la Comisión, del testimonio de su escritura o bases constitutivas, lo que ocurra primero.

Artículo 43

Las acciones representativas del capital social de las Sociedades Financieras Populares podrán ser adquiridas por cualquier persona, con excepción de las Instituciones Financieras a que se refiere la fracción IV del artículo 2o. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, las uniones de crédito podrán participar en el capital social de las Sociedades Financieras Populares, en los términos señalados en este Capítulo, debiendo en todo caso para efectos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, restar de su capital social, el importe correspondiente al capital invertido en la Sociedad Financiera Popular de que se trate.

Las acciones serán de igual valor, conferirán a sus tenedores los mismos derechos y obligaciones, y deberán pagars íntegramente en efectivo en el acto de ser suscritas.

Artículo 44

Ninguna persona física o moral podrá adquirir, directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de acciones por más del tres y diez por ciento del capital social de una Sociedad Financiera Popular, respectivamente. Para efectos de lo señalado en este artículo, se considerarán como una sola persona a aquellas que tengan vínculos patrimoniales entre sí, o que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del segundo grado, o civil.

Artículo 45

Las personas físicas y morales podrán adquirir o transmitir la propiedad de acciones de una Sociedad Financiera Popular hasta por un monto equivalente al tres por ciento del capital social de dicha Sociedad. En caso de que una persona moral pretenda adquirir o

transmitir hasta el diez por ciento del capital social de una Sociedad Financiera Popular, deberá solicitar la autorización de la Comisión, previo dictamen favorable de la Federación que la supervise de manera auxiliar.

Artículo 46

Las personas que adquieran o se les haya transmitido la propiedad de acciones de una Sociedad Financiera Popular, por más del uno por ciento del capital social de la Entidad, no podrán recibir créditos de la misma, pero sí podrán acceder a las demás operaciones o servicios de la Entidad. Las personas morales que posean hasta el cinco por ciento del capital de la Sociedad Financiera Popular y que cuenten con más de cincuenta socios, podrán recibir créditos, previo acuerdo de las dos terceras partes del consejo de administración.

TÍTULO TERCERO

De los Organismos de Integración

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 47

Las Entidades estarán sujetas a la supervisión de la Comisión, la que tendrá en lo que no se oponga a esta Ley, todas las facultades que en materia de inspección y vigilancia le confiere la Ley que la rige y la Ley de Instituciones de Crédito.

Dichas facultades podrán ser ejercidas directamente por la Comisión y de manera auxiliar por las Federaciones autorizadas conforme al presente Título.

La Comisión establecerá mediante disposiciones de carácter general la forma en que las Federaciones ejercerán las facultades de supervisión auxiliar de las Entidades.

Artículo 48

La Federación se constituirá con la agrupación voluntaria de Entidades, y deberá estar autorizada por la Comisión, para el desempeño de las facultades de supervisión auxiliar. Dichas facultades serán indelegables.

Artículo 49

La Confederación se constituirá con la agrupación voluntaria de Federaciones, y deberá estar autorizada por la Comisión, para el desempeño de las facultades de administración del Fondo de Protección a que se refiere el Capítulo

IV del Título Tercero de esta Ley. Además será el órgano de colaboración del Gobierno Federal para el diseño y ejecución de los programas que faciliten la actividad de ahorro y crédito popular.

Artículo 50

Los Organismos de Integración serán instituciones de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, podrán adoptar cualquier naturaleza jurídica, siempre que no tenga fines lucrativos. Las actividades de las Federaciones y las Confederaciones serán las propias de su objeto y se abstendrán de realizar actividades políticas partidistas.

Artículo 51

La solicitud de autorización para operar como Federación y Confederación, deberá presentarse ante la Comisión, acompañando la documentación e información que dicha

Comisión establezca mediante disposiciones de carácter general. Las autorizaciones que, en su caso, otorgue la Comisión serán por su propia naturaleza intransmisibles.

La Comisión contará con un plazo de noventa días naturales para emitir resolución respecto de las solicitudes de autorización que le hayan sido presentadas. Se entenderá que la Comisión resuelve en sentido negativo la solicitud de autorización, si no comunica lo contrario dentro del periodo mencionado.

Las autorizaciones de Federaciones y Confederaciones deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación en el ámbito geográfico en el que operará el Organismo de Integración de que se trate.

Artículo 52

Las Confederaciones y Federaciones podrán además realizar las siguientes actividades:

I. Fungir como representantes legales de sus afiliadas ante personas, organismos, autoridades e instituciones tanto nacionales como extranjeras;

II. Prestar entre otros, los servicios de asesoría técnica, legal, financiera y de capacitación;

III. Contratar créditos con el objeto de canalizarlos a las Federaciones y Entidades afiliadas que lo requieran;

IV. Promover la superación y capacidad técnica y operativa de sus afiliadas, así como de sus empleados, y

V. Homologar, en lo procedente, reglamentos, trámites y mecanismos operativos, así como sistemas contables e informáticos.

De igual forma, podrán integrar bases de datos para dar seguimiento al comportamiento crediticio de los acreditados de las Entidades, la calificación de riesgos, y en general el funcionamiento de las Entidades. Las Confederaciones y Federaciones únicamente utilizarán dicha información para el cumplimiento de su objeto, debiendo abstenerse de proporcionar información, cuando a su juicio ésta pueda ser usada para fines distintos de los antes mencionados.

Artículo 53

Los requisitos mínimos que deberá cumplir un Organismo de Integración para ser autorizado, serán:

I. Para Federaciones, tener cuando menos la solicitud de diez Entidades que deseen afiliarse. Para constituir una Confederación se requerirá la solicitud de cuando menos cinco Federaciones.

Para efectos del cómputo mínimo requerido conforme a lo señalado en el párrafo anterior, cuando los socios de una Entidad o Federación que forme parte de una Federación o una Confederación, respectivamente, adquieran directa o indirectamente acciones o certificados de participación con derecho a voto de otra Entidad o Federación, que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital pagado, tengan el control de las asambleas generales, estén en posibilidad de nombrar a la mayoría de los miembros del consejo de administración, o por cualquier otro medio controlen a las mencionadas Entidades o Federaciones, se considerarán como una sola Entidad o una sola Federación, según corresponda.

En caso de que el número de Entidades o Federaciones no sea el señalado conforme al primer párrafo de esta fracción, la Comisión evaluando el caso, podrá otorgar la autorización sin cumplir con el número de afiliados requerido.

En cualquier caso, al término de ciento veinte días naturales contados a partir de la fecha en que sean autorizadas, las Federaciones y las Confederaciones deberán tener afiliadas, respectivamente, al número mínimo de Entidades y Federaciones a que se refiere esta fracción.

Asimismo, para el caso en que la Comisión revoque la autorización otorgada a una Entidad o a una Federación, las Federaciones y las Confederaciones contarán con un plazo de doscientos cuarenta días naturales contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la revocación de que se trate, para tener afiliadas, respectivamente, al número mínimo de Entidades y Federaciones a que se refiere esta fracción. Dicho plazo podrá prorrogarse a juicio de la Comisión;

II. El proyecto de estatutos, en el que deberá indicarse su objeto y organización interna, entre otros. Los estatutos que deberán ser acordes con los principios de la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

III. El ámbito geográfico en el que operará;

IV. El programa general de operación, que permita a la Comisión evaluar si el Organismo de Integración podrá cumplir adecuadamente con su objeto. Dicho programa deberá contener, por lo menos:

a) Los planes de trabajo;

b) Las políticas de afiliación;

c) La información y documentación que acredite que cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo su objeto;

d) La relación de sus principales administradores y directivos, incluyendo al contralor normativo, debiendo acompañar el curriculum vitae de los mismos;

V. El proyecto de reglamento interior, conforme al cual ejercerá sus facultades de conformidad con esta Ley y las reglas que al efecto haya emitido la Comisión;

VI. Para las Federaciones que no pretendan afiliarse a una Confederación, la aprobación de alguna Confederación para que sus Entidades afiliadas participen en el Fondo de Protección administrado por aquélla, y

VII. La demás documentación que la Comisión considere necesaria para otorgar su autorización.

Las modificaciones que se pretendan efectuar a los estatutos, así como al reglamento interior del Organismo de Integración, deberán someterse a la previa aprobación de la Comisión, la cual contará con un plazo de cuarenta y cinco días hábiles para emitir su resolución al respecto. Dicho plazo comenzará a contar, a partir de la fecha en que sean presentados los documentos a la Comisión. Se entenderá que la Comisión resuelve en sentido negativo si no comunica lo contrario a Organismos de Integración correspondiente, dentro del periodo mencionado.

Artículo 54

Las Federaciones o Confederaciones no podrán afiliar a personas físicas, ni realizar operaciones con el público directamente o por interpósita persona.

Artículo 55

Cada Organismo de Integración formulará su reglamento interior, que deberá contener, entre otras, las normas aplicables a:

I.- Tratándose de una Federación:

a) La admisión, suspensión y exclusión de los afiliados;

b) La forma y metodología en que ejercerá las funciones de supervisión auxiliar sujetándose a las reglas de carácter general que emita la Comisión;

c) Las reglas prudenciales que en adición a las emitidas por la Comisión deberán observar sus Entidades afiliadas, y en su caso, las Entidades no afiliadas que supervise;

d) Los derechos y obligaciones de los afiliados, así como de las Entidades no afiliadas sobre las que se ejerzan las funciones de supervisión auxiliar;

e) La forma de determinar las cuotas que le deberán aportar las Entidades;

- f) Las aportaciones que las Entidades deberán cubrir para el Fondo de Protección, o bien, para el sistema de protección de ahorradores a que se refiere el último párrafo del artículo 105;
- g) Las medidas correctivas mínimas a las que deberán sujetarse las Entidades, incluyendo la facultad de nombrar a personas que se encarguen de la administración de la Entidad en sustitución de su consejo de administración y director o gerente general, o de quienes ejerzan tales funciones;
- h) Los mecanismos voluntarios de solución de controversias entre las Entidades y sus Clientes;
- i) El programa de control y corrección interno para prevenir conflictos de interés y uso indebido de la información, que se establezca conforme a las reglas de carácter general que emita la Comisión;
- j) Los procedimientos aplicables para el caso de que las Entidades incumplan sus obligaciones, incluyendo penas convencionales a su cargo y a favor de la Federación, y
- k) Los préstamos que podrán otorgarse entre sí las Entidades afiliadas conforme a lo señalado en el artículo 36, fracción

III.

II.- Tratándose de una Confederación:

- a) La forma y metodología en que se ejercerá la función para administrar el Fondo de Protección;
- b) Los derechos y obligaciones de las Federaciones que la integren;
- c) Las reglas prudenciales que en adición a las emitidas por la Comisión deberán observar las Entidades afiliadas y las no afiliadas;
- d) Las aportaciones que las Entidades deberán cubrir para el Fondo de Protección;
- e) El programa de control y corrección interno, y
- f) Los procedimientos aplicables para el caso de que las Federaciones incumplan sus obligaciones, incluyendo penas convencionales a su cargo y a favor de la Confederación.

Artículo 56

Los Organismos de Integración proporcionarán a sus afiliadas, la información sobre los servicios que ofrecen, y sobre el Fondo de Protección, con el objeto de fortalecer la cultura financiera en general y del ahorro popular en particular, el conocimiento y desarrollo de sus intermediarios, y el fortalecimiento de esquemas de financiamiento para individuos y micro, pequeñas y medianas empresas.

Artículo 57

Los Organismos de Integración autorizados llevarán un registro de Entidades o Federaciones afiliadas o, en su caso, de aquéllas sobre las que ejerzan funciones de supervisión auxiliar, el cual deberá proporcionarse a la Comisión mediante los medios que ésta señale en disposiciones de carácter general, a efecto de que ésta determine los medios para hacerlo del conocimiento público.

Artículo 58

Las Entidades, en su relación con los Organismos de Integración, tendrán las obligaciones siguientes:

- I. Aportar las cuotas periódicas que fije la asamblea general de afiliados de la Federación para su sostenimiento, cubrir el costo de supervisión auxiliar, y las aportaciones para la constitución del Fondo de Protección, en los términos de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen;

- II. Proporcionar a la Federación la información y documentación que le requiera para efectos de la supervisión auxiliar;
- III. En general cumplir con las estipulaciones contenidas en el contrato de afiliación o de supervisión auxiliar, según se trate, así como con la regulación prudencial que establezca la Comisión y, en su caso, la Confederación o la Federación;
- IV. Informar tanto a la Comisión como al Organismo de Integración respectivo, por conducto de cualquiera de los órganos de administración, director o gerente general de la propia Entidad, cuando se presuma fundadamente que se están llevando a cabo cualquiera de las conductas que señala el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 124 de esta Ley. En todo caso, la información a que se refiere la presente fracción deberá ser hecha del conocimiento de la Comisión de manera directa;
- V. Asistir, a través de sus representantes, a las sesiones de la asamblea general de afiliados del Organismo de Integración correspondiente y/o reuniones convocadas por la misma;
- VI. Cumplir con las resoluciones adoptadas por la asamblea general de afiliados del Organismo de Integración correspondiente, y
- VII. Las demás que le señale esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 59

Los Organismos de Integración estarán sujetos a la supervisión de la Comisión, la que tendrá en lo que no se oponga a esta Ley, todas las facultades que en materia de inspección y vigilancia le confiere su propia Ley y la Ley de Instituciones de Crédito.

Artículo 60

La Comisión, previa audiencia del Organismo de Integración de que se trate, podrá revocar, a su juicio, la autorización otorgada a las Federaciones para ejercer la función de supervisión auxiliar, y a las Confederaciones para manejar el Fondo de Protección, en los casos siguientes:

- I. Si no inicia operaciones dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha del otorgamiento de la autorización;
- II. Si no cumple, tratándose de Federaciones, diligentemente la labor de supervisión auxiliar que les fue encomendada;
- III. Si conforme a lo señalado en la fracción I del artículo 53 de esta Ley, no cumplen con el número mínimo de Entidades o Federaciones afiliadas, o si el número de Entidades o Federaciones afiliadas fuera menor a aquél que la Comisión autorizó; en términos de la misma;
- IV. Si efectúan operaciones en contravención a lo dispuesto por esta Ley o por las disposiciones que de ella emanen, o si sus actividades se apartan de las sanas prácticas, o si abandona o suspende sus actividades;
- V. Si a pesar de las observaciones de la Comisión, reiteradamente incumplen con las actividades objeto de la autorización;
- VI. Si no proporcionan a la Comisión la información requerida, o bien presentan de manera dolosa, información falsa o incompleta, que no permita conocer la situación real de las Entidades;
- VII. Si se manejan de manera irregular los recursos que integran el Fondo de Protección;
- VIII. Si obran sin autorización de la Comisión, en los casos en que la Ley así lo exija;
- IX. Si la Federación no acredita a la Comisión, que sus Entidades afiliadas participan en el Fondo de Protección administrado por alguna Confederación, y
- X. Si se disuelve, liquida o quiebra.

Las declaraciones de revocación se inscribirán en el Registro Público de Comercio, previa orden de la Comisión, y se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación en el ámbito geográfico en el que operaba el Organismo de Integración de que se trate. La revocación incapacitará al Organismo de Integración para

realizar sus operaciones a partir de la fecha en que se notifique la misma, se pondrá en estado de disolución y liquidación.

Artículo 61

Las Entidades afiliadas a una Federación cuya autorización hubiere sido revocada por la Comisión, deberán solicitar su afiliación a una Federación distinta o sujetarse al régimen de Entidad no afiliada en un término no mayor a diez días hábiles a partir de la fecha en que surta sus efectos la revocación antes citada.

Capítulo II

De las Federaciones

Sección Primera

De su organización y objeto

Artículo 62

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47, la supervisión auxiliar de las Entidades a cargo de las Federaciones tendrá por objeto revisar, verificar, comprobar y evaluar los recursos, obligaciones y patrimonio, así como las operaciones, funcionamiento, sistemas de control y en general, todo lo que pudiendo afectar la posición financiera y legal de las Entidades, conste o deba constar en los registros, a fin de que se ajusten al cumplimiento de las disposiciones que las rigen y a las sanas prácticas de la materia, en los términos que indique la Comisión en disposiciones de carácter general.

La supervisión consistirá en verificar que las Entidades cumplan con las disposiciones de esta Ley, con las reglas prudenciales emitidas por la Comisión, con los contratos de afiliación o de supervisión auxiliar, según se trate y con las demás disposiciones aplicables.

Artículo 63

Las Federaciones deberán contar con una asamblea general de afiliados que será el órgano supremo de la Federación y estará integrado por los representantes de las Entidades afiliadas. Además contarán con un consejo de administración, un gerente general, un consejo de vigilancia del que se designará un contralor normativo, un Comité de Supervisión y un auditor legal.

La Comisión, de acuerdo a los criterios que determine en reglas de carácter general, podrá exceptuar a las Federaciones de alguno de los órganos o personas antes indicados.

Estos órganos, el gerente general y el contralor normativo, así como el auditor legal, tendrán las atribuciones que se señalen en esta Ley, en los estatutos sociales, en las reglas que emita la Comisión y demás disposiciones aplicables.

A las asambleas deberá acudir con voz pero sin voto un representante de la Confederación a la que se encuentre afiliada.

Artículo 64

La asamblea general de afiliados de la Federación podrá estar integrada, a elección de las Entidades:

I. Por un representante de cada Entidad afiliada, o

II. A través de un sistema de representación proporcional, en el que se asignará a cada Entidad afiliada el número de votos que le correspondan, considerando el número de socios y/o los activos totales de cada Entidad. En ningún caso, una Entidad podrá representar más del veinte por ciento del total de votos.

Artículo 65

El consejo de administración de la Federación estará integrado por consejeros electos por la asamblea general de afiliados de la Federación, cuyo número no será menor de cinco ni mayor de quince, quienes deberán cumplir con los requisitos que para ser consejero de una Entidad señala el artículo 20. Los consejeros fungirán por un periodo máximo de hasta cinco años con posibilidad de una sola reelección.

Dicho consejo de administración podrá estar conformado hasta en un treinta por ciento del total de sus miembros, por consejeros o funcionarios de una Entidad o Confederación.

Los consejeros tendrán la obligación de comunicar al presidente del consejo sobre cualquier situación en la que se pueda derivar un conflicto de interés y abstenerse de participar en la deliberación y resolución correspondiente.

Artículo 66

El consejo de administración nombrará gerente general de la Federación a la persona que reúna los requisitos siguientes:

- I. Haber prestado por lo menos cinco años sus servicios en puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y experiencia en materias financiera y administrativa, y
- II. No tener alguno de los impedimentos que para ser consejero de una Entidad señala el artículo 21.

Artículo 67

El Comité de Supervisión será el encargado de ejercer la supervisión auxiliar de las Entidades afiliadas y de las no afiliadas que hayan celebrado el contrato respectivo, conforme a lo señalado en los artículos 82 y 87.

Este comité estará formado por personas designadas por el consejo de administración de la Federación respectiva, de entre los cuales se elegirá un presidente, el que deberá reportar los resultados de su gestión al consejo de administración y a la Comisión.

Los miembros del Comité de Supervisión únicamente podrán ser removidos de su cargo, contando con la aprobación de la Comisión, quien escuchará al interesado.

Para ser miembro del Comité de Supervisión será necesario:

- a) Tener reconocida experiencia en materias financiera y administrativa;
- b) No ser asesor o consultor de alguna Entidad;
- c) No tener litigio pendiente o adeudos vencidos con alguna Entidad u Organismo de Integración;
- d) No ser empleado, funcionario o miembro del consejo de administración o de vigilancia de alguna Entidad, o funcionario o miembro del consejo de administración de la Federación;
- e) No haber sido sentenciado por delitos intencionales patrimoniales o inhabilitado para ejercer el comercio, o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el sector público Federal, Estatal o Municipal, en el Sistema Financiero Mexicano o en el Sistema de Ahorro y Crédito Popular;
- f) No estar sujeto a concurso o declarado en quiebra, o encontrarse inhabilitado para ejercer el comercio;
- g) No tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o civil con algún miembro del consejo de administración, consejo de vigilancia o comisario o con el director o gerente general de alguna Entidad, y

h) Cualquier persona que desempeñe un cargo público, de elección popular o dirigencia partidista.

Las Federaciones, contando con la autorización de la Comisión, podrán acordar entre ellas el establecimiento de comités de supervisión comunes. Esta autorización estará sujeta, a la capacidad de dicho comité para llevar a cabo sus funciones, y al crecimiento de las Federaciones que acuerden su establecimiento.

En el caso de comités de supervisión comunes, éstos estarán integrados por un número impar de personas, no pudiendo ser menor a cinco, quienes serán nombradas y removidas de manera equitativa por los consejos de administración de las Federaciones participantes.

Artículo 68

Son facultades del Comité de Supervisión, además de las conferidas en esta Ley y en las reglas que al efecto establezca la Comisión, las siguientes:

- I. Solicitar a los órganos de la Entidad, la información necesaria para la supervisión auxiliar;
- II. Proponer las políticas y los lineamientos respecto a la supervisión auxiliar, contando con la aprobación del consejo de administración, y
- III. Las demás que la asamblea general o los estatutos de la Federación determinen.

Artículo 69

Son obligaciones del Comité de Supervisión, además de las conferidas en esta Ley y en las reglas que al efecto establezca la Comisión, las siguientes:

- I. Expedir a las sociedades, un dictamen respecto del cumplimiento de los requisitos para constituirse como Entidades;
- II. Llevar a cabo las tareas de supervisión auxiliar de las Entidades afiliadas a la Federación que corresponda, así como de las Entidades no afiliadas sobre las cuales se les hubiere encomendado su supervisión auxiliar, y emitir los reportes que correspondan;
- III. Evaluar y vigilar el cumplimiento de la regulación prudencial;
- IV. Realizar visitas de inspección a las Entidades;
- V. Determinar la aplicación del programa de medidas correctivas mínimas y supervisar su cumplimiento;
- VI. Informar a la Federación y a la Comisión que procederá en términos del artículo 75, así como cuando haya procedido conforme a lo señalado en el artículo 77 de esta Ley;
- VII. Informar al Comité Técnico y a la Comisión respecto de la situación financiera, operativa y legal de la Entidad, que a su juicio, fuera susceptible de ser intervenida gerencialmente por la Comisión;
- VIII. Reportar al consejo de administración de la Federación sobre su gestión, así como las irregularidades detectadas a las Entidades en el desempeño de sus actividades de supervisión auxiliar, y
- IX. Las demás que los estatutos de la Federación determinen.

Artículo 70

La vigilancia interna de la Federación estará a cargo de un consejo de vigilancia, o su equivalente, cuyas responsabilidades y obligaciones deberán determinarse en los estatutos de la Federación correspondiente.

Tratándose del consejo de vigilancia, éste será encabezado por un contralor normativo, quien será elegido por el consejo de administración y aprobado por la asamblea general, y será el responsable de vigilar que los funcionarios y empleados de la Federación, cumplan con la normatividad aplicable.

El contralor normativo realizará las siguientes funciones:

- I. Verificar que las Federaciones cumplan con la regulación aplicable;
 - II. Recibir los informes del Comité de Supervisión y los dictámenes de los auditores externos para su conocimiento y análisis;
 - III. Informar a la Comisión, al consejo de administración y a la asamblea general del cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades, así como en cualquier momento de los hallazgos e irregularidades de que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones, y
 - IV. Proponer al consejo de administración el programa de control y corrección interno de la Federación y sus modificaciones, a efecto de prevenir conflictos de interés y el uso indebido de la información.
- El contralor normativo asistirá con voz pero sin voto a las sesiones del consejo de administración de la Federación.
- Los miembros del consejo de vigilancia y el contralor normativo deberán cumplir con los requisitos que para ser consejero de una Entidad señala el artículo 20.

Artículo 71

Las Federaciones deberán verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en esta Ley, por parte de las personas que sean designadas como consejeros, gerente general, miembros del Comité de Supervisión, miembros del consejo de vigilancia y contralor normativo, con anterioridad al inicio de sus gestiones. La Comisión podrá establecer, mediante disposiciones de carácter general, criterios relativos a los requisitos que las citadas personas estén obligadas a cumplir y lineamientos para su debido acreditamiento, así como para la integración de la documentación comprobatoria relativa.

En todo caso, las personas a que se refiere el párrafo anterior deberán manifestar por escrito a la Federación de que se trate y bajo protesta de decir verdad que no se ubican en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 21, tratándose de consejeros, gerente general, miembros del consejo de vigilancia y contralor normativo; y 67 incisos c), d), e), f), g) y h), para los miembros del Comité de Supervisión.

Las Federaciones deberán informar a la Comisión la designación de nuevos consejeros, gerente general, miembros del Comité de Supervisión, miembros del consejo de vigilancia y el contralor normativo, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su designación.

Tratándose de consejeros, gerente general y miembros del Comité de Supervisión y del consejo de vigilancia, incluyendo al contralor normativo, la Comisión tendrá la facultad de veto.

Sección Segunda

De su funcionamiento y de las medidas correctivas

Artículo 72

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 47, las Entidades estarán obligadas a:

- I. Proporcionar a la Federación que ejerza sobre ellas la supervisión auxiliar, todos los documentos, información, registros, correspondencia y sistemas de almacenamiento de datos necesarios para la verificación, en los términos del contrato de afiliación o de supervisión auxiliar que corresponda, y
- II. Cumplir con las medidas correctivas a que se refiere este Capítulo, permitir la práctica de visitas y auditorías para la comprobación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley, de las disposiciones que de ella emanen y de los contratos citados.

Artículo 73

En el ejercicio de sus funciones de supervisión auxiliar, el Comité de Supervisión de la Federación clasificará a las Entidades en alguna de las cuatro categorías a que se refiere el artículo 74 de esta Ley, según su adecuación a los requerimientos de capitalización emitidos por la Comisión. Dicha Comisión establecerá mediante reglas de carácter general los rangos de capitalización que determinarán cada una de tales categorías.

La Comisión, mediante disposiciones de carácter general, establecerá las medidas correctivas mínimas con que deberán cumplir las Entidades, así como sus características y plazos para su cumplimiento de acuerdo con la categoría en que hubiesen sido clasificadas. El Comité de Supervisión de la Federación deberá verificar que las Entidades cumplan con las medidas correctivas mínimas que les correspondan y tendrá el derecho de ordenar a éstas, la implementación de medidas especiales adicionales a las anteriores. Estas medidas tendrán por objeto prevenir, y en su caso, normalizar oportunamente las anomalías financieras o de cualquier otra índole, que las Entidades presenten, derivadas de las operaciones que realicen y que puedan afectar su estabilidad o solvencia, o pongan en riesgo los intereses de los ahorradores.

Artículo 74

De manera enunciativa y no limitativa, las Entidades deberán cumplir con las medidas que se indican a continuación, dependiendo de la categoría de capitalización en que se encuentren clasificadas:

I. Las Entidades clasificadas dentro de la categoría uno, no podrán celebrar operaciones que las lleven a ser clasificadas dentro de una categoría de capitalización inferior;

II. Las Entidades que se clasifiquen dentro de la categoría dos, deberán, entre otras acciones:

- a) Suspender las aportaciones al fondo de obra social;
- b) Suspender el pago de dividendos o excedentes o cualquier otro mecanismo que implique una transferencia de beneficios patrimoniales a los Socios;
- c) Presentar un plan de restauración de capital que deberá ser aprobado por la Federación;
- d) Limitar el crecimiento de los activos en riesgo de la Entidad;
- e) Someter a aprobación de la Federación correspondiente, cualquier transacción material distinta de las que corresponden a su negocio natural, incluyendo las que tienen que ver con cualquier inversión, expansión o adquisición, y
- f) Revisar e instrumentar adecuaciones a las políticas de compensaciones adicionales y extraordinarias al salario de los funcionarios de niveles superiores de las Entidades, así como a las políticas de contratación de personal de las mismas.

III. Las Entidades clasificadas dentro de la categoría tres, estarán sujetas a las mismas acciones obligatorias que las establecidas para las Entidades clasificadas dentro de la categoría dos, y adicionalmente deberán:

- a) Restringir sus operaciones y actividades con las personas a que se refiere el artículo 35 de esta Ley, y
- b) Constituir un encaje sobre la captación de nuevos pasivos, y condicionar las nuevas operaciones activas que realice a la obtención de garantías reales.

IV. Las Entidades clasificadas dentro de la categoría cuatro, les será aplicable lo dispuesto en el artículo 75 de esta Ley.

Las Entidades deberán prever lo relativo a la implementación de medidas correctivas dentro de sus estatutos sociales.

Artículo 75

En caso de que una Entidad fuese clasificada en la categoría cuatro, el Comité de Supervisión de conformidad con el contrato de afiliación o de supervisión auxiliar,

solicitará la remoción del director o gerente general y del consejo de administración, debiendo informarlo al Comité Técnico. Este último, de conformidad con los contratos de referencia, designará a las personas que se encargarán de la administración de la Entidad, quienes deberán contar con las facultades a que se refiere el artículo 79 de esta Ley, y procederá a la selección de alguno de los mecanismos señalados en el artículo 90.

Artículo 76

Cuando de los dictámenes del Comité de Supervisión se desprenda alguna operación que se considere irregular, que no afecte la estabilidad o la solvencia de la Entidad y no ponga en riesgo los intereses de los ahorradores, dicho Comité, previa audiencia de la Entidad de que se trate, ordenará a la Entidad la aplicación de las medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las sanciones que procedan conforme a lo dispuesto en el Título Sexto de este ordenamiento.

Artículo 77

El Comité de Supervisión de la Federación, previa audiencia de la Entidad de que se trate y de conformidad con el contrato de afiliación o de supervisión auxiliar que ésta haya celebrado con la Entidad, solicitará la remoción del director o gerente general y del consejo de administración, informando esta situación al Comité Técnico, cuando se presenten causas graves, que afecten la estabilidad o la solvencia de la Entidad y pongan en riesgo los intereses de los ahorradores. En este caso, el Comité Técnico, de conformidad con los contratos de referencia, designará a las personas que se encargarán de la administración de la Entidad, quienes deberán contar con las facultades a que se refiere el artículo 79 de esta Ley, y procederá a la selección de alguno de los mecanismos a que se refiere el artículo 90.

Entre las causales que motivarán la remoción a que se refiere el párrafo anterior, se encuentran:

- I. Si la Entidad reiteradamente incumple con la regulación prudencial establecida por la Comisión, Confederación o Federación;
- II. Si reiteradamente, a pesar de las observaciones efectuadas por la Federación, la Entidad realiza operaciones irregulares, ilegales o distintas a las que le están permitidas;
- III. Si sus actividades se apartan de las sanas prácticas de los mercados en que opera;
- IV. Si por causas imputables a la Entidad no aparecen debida y oportunamente registradas en su contabilidad las operaciones que haya efectuado y, por tanto, no se refleja su verdadera situación financiera;
- V. Si la Entidad proporciona dolosamente información falsa o incompleta a la Federación;
- VI. Si la Entidad reiteradamente no proporciona a la Comisión y/o Federación, los informes, y documentos que sobre su organización, operaciones, contabilidad, inversiones o patrimonio les soliciten la Comisión o la Federación para fines de regulación, supervisión, control, inspección, vigilancia, estadística y demás funciones que conforme a esta Ley u otras disposiciones legales y administrativas, les corresponda ejercer;
- VII. Si suspende en forma total o parcial, la prestación de sus servicios sin la aprobación de la Federación, salvo en caso fortuito o de fuerza mayor;
- VIII. Si la Entidad ejecuta u omite actos que impidan la prestación continua de los servicios que desarrolle;
- IX. Si presta servicios distintos a los señalados en el contrato de afiliación o de supervisión auxiliar respectivo;
- X. Si la Entidad no aplicó las medidas correctivas que le fueron determinadas, y
- XI. Las demás que se hayan pactado en el contrato de afiliación o en el de supervisión auxiliar, según sea el caso.

Las personas designadas en los términos de este artículo deberán rendir cuentas al Comité Técnico y podrán ser removidas por éste.

Artículo 78

Cuando a juicio de la Comisión existan irregularidades de cualquier género en las Entidades y determine que se encuentran en riesgo los intereses de los ahorradores o bien se ponga en peligro su estabilidad o solvencia, el presidente de la Comisión podrá de inmediato declarar la intervención con carácter de gerencia y designar a la persona física que se haga cargo de la Entidad respectiva, con el carácter de interventor-gerente.

El interventor-gerente deberá informar al Comité Técnico, del estado en que se encuentre la Entidad, a fin de que éste adopte alguno o varios de los mecanismos a que se refiere el artículo 90.

Artículo 79

El interventor-gerente tendrá todas las facultades que correspondan al consejo de administración y al director o gerente general de la Entidad, estando obligados éstos a proporcionarle toda la información y otorgarle las facilidades que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

También tendrá plenos poderes generales para actos de dominio, de administración, de pleitos y cobranzas, con las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley, para otorgar y suscribir títulos de crédito, para presentar denuncias y querellas y desistirse de estas últimas, previo acuerdo con el presidente de la Comisión y para otorgar los poderes generales o especiales que juzgue convenientes, y revocar los que estuvieren otorgados por la Entidad intervenida y los que él mismo hubiere conferido.

El interventor-gerente no quedará supeditado en su actuación a la asamblea de Socios ni al consejo de administración; pero la asamblea de Socios podrá continuar reuniéndose regularmente para conocer de los asuntos que le compete y lo mismo podrá hacer el consejo para estar informado por el interventor-gerente sobre el funcionamiento y las operaciones que realice la Entidad y para opinar sobre los asuntos que el mismo interventor-gerente someta a su consideración. El interventor-gerente podrá citar a asamblea de Socios y reuniones del consejo de administración con los propósitos que considere necesarios o convenientes.

En caso de no encontrarse presente el director o gerente general al momento de la intervención, el interventor-gerente se entenderá con cualquier funcionario de la Entidad que se encuentre presente.

En el caso que señala el párrafo anterior, el director o gerente general será responsable de los actos y operaciones que hubiere realizado contraviniendo lo dispuesto en ésta u otras leyes aplicables.

El oficio que contenga el nombramiento de interventor-gerente deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio que corresponda al domicilio social de la Entidad intervenida, sin más requisitos que el oficio respectivo de la Comisión.

Cuando ésta acuerde levantar la intervención, lo comunicará así al encargado del Registro Público de Comercio, a efecto de que se cancele la inscripción respectiva.

Artículo 80

En aquellos casos previstos en los artículos 75, 77 y 78, las personas que tengan a su cargo la administración, podrán determinar la suspensión parcial de sus operaciones o el cierre de oficinas y sucursales, con aprobación del Comité Técnico, debiendo tomar las medidas necesarias para que la Entidad no celebre nuevas operaciones de ahorro y crédito y no se cubran las obligaciones a su cargo hasta en tanto se adopte algún mecanismo de los previstos en la Sección Quinta, Capítulo II, Título Tercero de esta Ley.

Lo anterior, con excepción del pago a los ahorradores que podrá ser hasta por el cincuenta por ciento del monto garantizado por el Fondo de Protección para la Entidad de que se trate, de conformidad con lo que determine el Comité Técnico, siempre que los depósitos sean líquidos y exigibles. Dichos pagos se descontarán del monto garantizado a que se refiere el artículo 106.

El monto de los depósitos que no hubieran sido pagados conforme a lo anterior, se renovararán a las mismas tasas de interés pactadas originalmente y hasta la fecha en que se adopte el mecanismo correspondiente.

Sección Tercera

De la afiliación

Artículo 81

Las Entidades podrán afiliarse a una Federación autorizada por la Comisión para supervisarlas de manera auxiliar. La Federación, a su vez, podrá afiliarse a una Confederación autorizada por la Comisión para que administre el Fondo de Protección a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero.

La Federación publicará semestralmente en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación en el ámbito geográfico en el que opera, la lista de sus Entidades afiliadas.

Artículo 82

Para efectos de lo señalado en el artículo 81 anterior, la Entidad celebrará un contrato de afiliación con la Federación, en el que se establecerá, entre otras estipulaciones la conformidad por parte de la Entidad con los términos y condiciones en que se ejercerá la facultad de supervisión auxiliar, previstos en esta Ley, en las disposiciones que de ella emanen, así como en el reglamento interior de la Federación, y el reconocimiento de la Entidad para sujetarse a las medidas correctivas y mecanismos previstos en la Sección Quinta, Capítulo II, Título Tercero de esta Ley, que instrumente la Federación.

Artículo 83

Para formalizar el contrato de afiliación deberá cumplirse cuando menos con lo siguiente:

- I. Exhibir acta del acuerdo de asamblea de la Entidad en la que se haya acordado la afiliación correspondiente;
- II. Contar con el dictamen favorable de la Federación, y
- III. Contar con la autorización de la Comisión, para operar como Entidad.

La formalización de dicho convenio deberá efectuarse a más tardar dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se les haya notificado la autorización para operar como Entidad y deberán enviar un ejemplar del mismo a la Comisión a través de la Federación respectiva.

Artículo 84

La Entidad podrá solicitar en cualquier momento a la Federación correspondiente su desafiliación, la cual únicamente será reconocida previo dictamen de un auditor externo designado por la Federación y con cargo a la Entidad, que determine la viabilidad financiera de la misma.

Artículo 85

La Federación a través del Comité de Supervisión, podrá dictaminar la desafiliación de una Entidad cuando ésta incumpla con las obligaciones a que se refiere el artículo 58 fracción VI, así como en los casos previstos en su reglamento interior.

Artículo 86

La Entidad que solicite su desafiliación, no tendrá derecho a que se le reintegren las aportaciones que haya efectuado con anterioridad al Fondo de Protección, pero podrá seguir disfrutando de los derechos inherentes al mismo, en caso de que se afilie a otra Federación que a su vez esté afiliada a la misma Confederación.

Para los efectos de los artículos 84 y 85, la Federación continuará ejerciendo sobre la Entidad desafiliada, las labores de supervisión auxiliar, debiendo esta última cubrir el costo de esa supervisión en términos del artículo 88 de esta Ley, hasta en tanto celebre un nuevo contrato de afiliación con una Federación distinta, o se sujete al régimen de Entidad no afiliada, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

Sección Cuarta

De las Entidades no afiliadas

Artículo 87

Las sociedades que, habiéndose organizado con arreglo a esta Ley para operar como Entidades, no celebren contrato de afiliación con una Federación, serán consideradas como Entidades no afiliadas.

La Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 9o., asignará a las Entidades no afiliadas una Federación para que las supervise de manera auxiliar, debiendo celebrarse al efecto, un contrato de supervisión auxiliar entre dicha Federación y la Entidad no afiliada.

La formalización del contrato a que se refiere el párrafo anterior, deberá efectuarse a más tardar dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se haya notificado la asignación de la Federación que supervisará de manera auxiliar a la Entidad, la cual deberá enviar un ejemplar del mismo a la Comisión a través de la Federación respectiva.

Artículo 88

En el contrato de supervisión auxiliar que celebre la Entidad no afiliada, deberá establecerse, entre otras estipulaciones, la conformidad por parte de la Entidad con los términos y condiciones en que se ejercerá la facultad de supervisión auxiliar, previstos en esta Ley, en las disposiciones que de ella emanen, así como en el reglamento interior de la Federación, y el reconocimiento de la Entidad para sujetarse a las medidas correctivas y mecanismos previstos en la Sección Quinta, Capítulo II, Título Tercero de esta Ley, que instrumente la Federación.

La Entidad no afiliada tendrá todas las obligaciones de las Entidades afiliadas inherentes a la supervisión auxiliar, incluyendo la de cubrir el costo de la supervisión auxiliar.

Artículo 89

Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, las Entidades no afiliadas estarán sujetas a lo siguiente:

I. Participar en un Fondo de Protección en términos del Título Tercero de esta Ley, o en su caso, a constituir un sistema de protección a ahorradores conforme a lo señalado en el último párrafo del artículo 105, y

II. La Federación que las supervise de manera auxiliar podrá prestarles servicios complementarios a un costo que no podrá ser inferior al que corresponda a una Entidad afiliada.

Sección Quinta

De la Escisión, Fusión, Venta, Disolución y Liquidación

Artículo 90

Para los efectos de esta Ley, se podrán utilizar los siguientes mecanismos:

- I. La escisión de la Entidad;
- II. La fusión de la Entidad;
- III. La venta de la Entidad, y
- IV. La disolución y liquidación de la Entidad, y el consecuente pago de los depósitos de dinero a sus ahorradores, en los términos de esta Ley.

Artículo 91

El Comité Técnico dispondrá de un término que no excederá de ciento ochenta días naturales contados a partir de la aplicación de las medidas a que se refieren los artículos 75, 77 y 78, para determinar de entre los mecanismos señalados en el artículo 90, aquél que resulte en un menor costo para el Fondo de Protección. En este sentido, dicho Comité fijará los plazos que considere adecuados para dar cumplimiento a cada una de las acciones que formen parte del mecanismo seleccionado.

La selección del mecanismo que se adopte deberá realizarse con base en un estudio técnico, elaborado por un auditor externo y aprobado por el Comité Técnico, que justifique la idoneidad de dicho mecanismo.

Artículo 92

Para el caso de que el Comité Técnico determine como mecanismo a seguir, la escisión, fusión o venta de la Entidad, el Fondo de Protección podrá otorgar apoyos financieros tendientes a cubrir los costos derivados de la aplicación de los mecanismos adoptados.

En ningún caso, en los documentos en que se implementen los actos necesarios para llevar a cabo la escisión, fusión o venta de la Entidad, podrá establecerse a cargo del Fondo de Protección, el pago de cantidades que excedan del importe que se tendría que cubrir por los depósitos de dinero de los ahorradores en términos del artículo 106 de esta Ley.

Tales apoyos financieros deberán quedar garantizados con los títulos representativos del capital social de la Entidad, para lo cual la persona que tenga a su cargo la administración podrá efectuar la afectación en garantía correspondiente.

La garantía a favor del Fondo de Protección se considerará de interés público y preferente a cualquier derecho constituido sobre los títulos y el ejercicio de los derechos patrimoniales y corporativos inherentes a los títulos representativos del capital social de la Entidad, corresponderán al Fondo de Protección. El producto que se derive del ejercicio de los derechos patrimoniales, será a favor del Fondo de Protección.

Artículo 93

Si la Entidad requiere ser capitalizada para implementar los mecanismos de escisión, fusión o venta, el Fondo de Protección, en ejercicio de los derechos corporativos de los títulos representativos del capital social de las Entidades conforme al artículo 92, podrá efectuar las aportaciones de capital necesarias de acuerdo a lo siguiente:

- I. Deberá realizar los actos tendientes a aplicar las partidas positivas del capital contable de la Entidad a la absorción de pérdidas que tenga la misma;
- II. Efectuada la aplicación a que se refiere la fracción anterior, procederá a reducir el capital social y a realizar un aumento que suscribirá y pagará el Fondo de Protección, y

III. Una vez hechas las aportaciones por parte del Fondo de Protección, éste deberá otorgar a los anteriores Socios el derecho a adquirir títulos representativos del capital social de la Entidad conforme a los porcentajes de que eran titulares hasta la fecha en que el propio Fondo de Protección haya suscrito y pagado los nuevos títulos, previo pago de la proporción de pérdidas que les corresponda.

Para efectos de lo anterior, el Fondo de Protección publicará el aumento de capital que se realice. Los Socios a que se refiere la fracción III del artículo anterior, contarán con un plazo de treinta días hábiles a partir de la publicación mencionada, para adquirir del Fondo de Protección los títulos que correspondan.

En beneficio del interés público, en los estatutos y en los títulos representativos del capital social de las Entidades, deberá preverse expresamente lo dispuesto en el artículo 92, así como el consentimiento de los Socios a las condiciones previstas en el mismo.

Artículo 94

Para el caso de que el Comité Técnico determine como mecanismo a seguir la disolución y liquidación de la Entidad y el consecuente pago de los depósitos de dinero, los pasivos a cargo de la Entidad serán cubiertos de conformidad con lo señalado en el Capítulo IV de este Título.

Artículo 95

Las Entidades se disolverán por las causas siguientes:

- I. Por el consentimiento de la asamblea de Socios;
- II. Porque el número de Socios llegue a ser inferior al mínimo que establece la ley aplicable;
- III. Por imposibilidad de seguir realizando el objeto de la Entidad;
- IV. Porque se le revoque la autorización para operar;
- V. Por resolución del Comité Técnico en términos de esta Sección, y
- VI. Por resolución judicial.

Artículo 96

La disolución, liquidación y en su caso concurso mercantil de las Entidades, se regirán por lo dispuesto en la legislación aplicable, según corresponda a su naturaleza jurídica, en lo que no se oponga a lo establecido por esta Ley, y por el Título Octavo, Capítulo II de la Ley de Concursos Mercantiles, con las excepciones siguientes:

I. El Comité Técnico, será el encargado de adoptar las decisiones relativas a las facultades del liquidador y síndico.

Dicho cargo podrá recaer en el interventor-gerente, en caso de que la Entidad se encuentre intervenida por la Comisión, a partir de que la misma se encuentre en estado de liquidación o se declare el concurso mercantil, según se trate, o en quien el propio Comité Técnico decida;

II. A partir de la fecha en que entre en liquidación una Entidad o se le declare en concurso mercantil, los pagos derivados de sus operaciones se suspenderán hasta en tanto el Comité Técnico citado resuelva lo conducente, y

III. Podrán demandar la declaración de concurso mercantil de una Entidad, solicitando que inicie en la etapa de quiebra, el Comité Técnico o la Comisión en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 97

A partir de la fecha en que se admita la demanda de concurso mercantil de alguna Entidad, en los términos del artículo 96 fracción III, ésta deberá suspender la realización de cualquier tipo de operaciones.

El Comité Técnico del Fondo de Protección, será quien le solicite al juez la implementación de las medidas de apremio necesarias. Corresponderá al Comité Técnico proponer al juez la designación, remoción o sustitución, en su caso, del síndico del concurso mercantil de una Entidad.

Las propuestas de enajenación que presente el síndico, con la aprobación del Comité Técnico, no podrán ser objetadas por la Entidad.

Cuando se declare el concurso mercantil de una Entidad, el procedimiento se iniciará en todos los casos en la etapa de quiebra.

Capítulo III

De la Organización y Funcionamiento de las Confederaciones

Artículo 98

Las Confederaciones, además de su objeto señalado en el artículo 49, tendrán las facultades de homologar las políticas de supervisión auxiliar de sus Federaciones afiliadas dentro de los términos de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen; dar seguimiento al cumplimiento de tales políticas, y supervisar a las Federaciones en la prestación de servicios distintos a la supervisión auxiliar.

Las Confederaciones publicarán semestralmente en el Diario Oficial de la Federación, la lista de sus Federaciones afiliadas, con quienes deberán celebrar el contrato de afiliación respectivo. En dicho contrato se establecerá, entre otras estipulaciones, la conformidad por parte de la Federación con los términos en que se manejará el Fondo de Protección previstos en esta Ley, en las disposiciones que de ella emanen, así como en el reglamento interior de la Confederación.

Artículo 99

Las Confederaciones deberán contar con una asamblea general que será el órgano supremo de la Confederación, y estará integrada por los representantes de las Federaciones afiliadas. Las Confederaciones contarán además con los órganos señalados en el artículo 63, salvo por lo que se refiere al Comité de Supervisión, los cuales se registrarán conforme a lo previsto en el mismo.

Artículo 100

La asamblea general podrá estar integrada, a elección de las Federaciones afiliadas:

- I. Por un representante de cada Federación afiliada, o
- II. A través de un sistema de representación proporcional, en el que se asignará a cada Federación afiliada el número de votos que le correspondan, considerando el número de Entidades, Socios y/o sus activos totales. En ningún caso, una Federación podrá representar más del veinte por ciento del total de votos.

Artículo 101

El consejo de administración de la Confederación estará integrado por consejeros electos por la asamblea general, cuyo número no será menor de cinco ni mayor de quince, quienes deberán cumplir con los requisitos que para ser consejero de una Entidad señala el artículo 20.

Los consejeros fungirán por un periodo máximo de hasta cinco años con posibilidad de una sola reelección. El presidente del consejo de administración tendrá voto de calidad en caso de empate.

Dicho consejo de administración podrá estar conformado hasta en un treinta por ciento del total de sus miembros, por consejeros o funcionarios de una Entidad o Federación. Los consejeros tendrán la obligación de comunicar al presidente del consejo sobre cualquier situación en la que se pueda derivar un conflicto de interés y abstenerse de participar en la deliberación y resolución correspondiente.

Artículo 102

El consejo de administración de la Confederación nombrará al gerente general, quien deberá cumplir los requisitos señalados en el artículo 66.

Artículo 103

La vigilancia interna de la Confederación estará a cargo de un consejo de vigilancia y un contralor normativo, de un auditor interno o su equivalente, mismo que deberá determinarse en los estatutos de la Confederación correspondiente.

Los miembros del consejo de vigilancia, el auditor interno o su equivalente, deberán cumplir con los requisitos que para ser consejero de una Entidad señala el artículo 20.

Artículo 104

Las Confederaciones deberán verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en esta Ley, por parte de las personas que sean designadas como consejeros, gerente general, miembros del consejo de vigilancia y el contralor normativo, del auditor interno o su equivalente, con anterioridad al inicio de sus gestiones. La Comisión podrá establecer, mediante disposiciones de carácter general, criterios relativos a los requisitos que las citadas personas estén obligadas a cumplir y lineamientos para su debido acreditamiento, así como para la integración de la documentación comprobatoria relativa.

En todo caso, las personas a que se refiere el párrafo anterior deberán manifestar por escrito a la Confederación de que se trate y bajo protesta de decir verdad, que no se ubican en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 21 de esta Ley.

Las Confederaciones deberán informar a la Comisión la designación de nuevos consejeros, gerente general, miembros del consejo de vigilancia y contralor normativo, del auditor interno o su equivalente, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su designación.

Tratándose de consejeros, gerente general y miembros del consejo de vigilancia, incluyendo al contralor normativo, del auditor interno o su equivalente, la Comisión tendrá la facultad de veto.

Capítulo IV

Del Fondo de Protección

Artículo 105

Las Entidades deberán participar en el sistema de protección a ahorradores denominado Fondo de Protección, que deberá constituirse por cada Confederación de conformidad con lo señalado en el artículo 107.

Para tales efectos, las Entidades afiliadas a una Federación deberán participar en el Fondo de Protección constituido por la Confederación de la cual la Federación sea integrante.

Las Federaciones que no formen parte de una Confederación, deberán convenir con alguna Confederación que sus Entidades afiliadas participen en su Fondo de Protección. La Comisión procederá en términos del artículo 37, con las Federaciones que no logren convenir lo anterior.

Tratándose de Entidades no afiliadas, éstas deberán solicitar a alguna Confederación participar en su Fondo de Protección, y en caso de que ésta acepte, la Entidad deberá convenir con alguna Federación miembro de la Confederación respectiva la celebración de un contrato de supervisión auxiliar.

Excepcionalmente y a juicio de la Comisión, las Entidades no afiliadas podrán establecer su propio Fondo de Protección, cumpliendo con los requisitos establecidos en las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Comisión, el cual en ningún caso podrá brindar menores beneficios para los ahorradores que los previstos en el presente Capítulo.

Artículo 106

El Fondo de Protección tendrá como fin primordial procurar cubrir los depósitos de dinero de cada ahorrador, considerando el monto del principal y accesorios, hasta por una cantidad equivalente a cuatro mil, seis mil, ocho mil y diez mil unidades de inversión para los Niveles de Operaciones I, II, III y IV, respectivamente, por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Entidad, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil.

Asimismo, tendrá como fin otorgar apoyo financiero a las Entidades que se ubiquen en los supuestos señalados en el artículo 92, siempre y cuando esta opción se considere razonablemente menos costosa que el pago de los depósitos de dinero de los ahorradores.

Excepcionalmente, el Fondo de Protección podrá otorgar apoyos preventivos de liquidez a las Entidades que participen en el mismo, siempre y cuando se cuente para ello con:

I. Que la Entidad esté cumpliendo, o haya cumplido con las medidas correctivas que la Federación le haya impuesto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 72 de esta Ley;

II. Un estudio técnico elaborado por auditor externo y aprobado por el Comité Técnico, que justifique la viabilidad de la Entidad, la idoneidad del apoyo y que resulte en un menor costo para el Fondo;

III. Un programa de restauración de capital, y

IV. El otorgamiento de garantías a satisfacción del Fondo de Protección.

La suma de los montos de los apoyos preventivos de liquidez que otorgue el Fondo de Protección, en ningún momento podrá exceder del quince por ciento del patrimonio de dicho Fondo.

Una vez cubierto el pago por parte de la Entidad de los apoyos otorgados, el Comité Técnico podrá levantar las medidas que le hayan sido impuestas a la Entidad, de conformidad con lo establecido en el programa de restauración de capital.

Las Entidades tendrán la obligación de informar a sus Socios, Clientes, así como al público en general, sobre los términos y condiciones del Fondo de Protección en el que participen.

Artículo 107

Cada Confederación deberá constituir un fideicomiso de administración y garantía, en cuyo contrato deberá señalarse como fideicomitente a la Confederación de que se trate, como fideicomitentes por adhesión a las Entidades que participen en el Fondo respectivo y como fiduciaria a alguna institución de crédito. De igual forma, deberá preverse la existencia de un Comité Técnico que tendrá las facultades que se establecen en el artículo 111 de esta Ley, correspondiéndole además la adopción de las medidas tendientes a la administración y destino de los recursos existentes en el Fondo de

Protección para el evento de que fuera revocada la autorización de la Confederación respectiva.

Artículo 108

El Fondo de Protección se constituirá e integrará con las aportaciones mensuales que deberán cubrir las Entidades por este concepto a la Confederación correspondiente, mismas que se determinarán tomando en consideración el Nivel de Operaciones que podrá efectuar cada Entidad. Dichas aportaciones serán de entre 1 y 3 al millar anual sobre el monto de

pasivos de la Entidad que sean objeto de protección conforme a lo dispuesto por el artículo 106 de esta Ley. El rango dentro del cual se ubicarán las aportaciones y la forma para calcular y pagar mensualmente la aportación respectiva, serán determinados por la Comisión a través de reglas de carácter general.

Los recursos que integren el Fondo de Protección, deberán invertirse en valores gubernamentales de amplia liquidez o en títulos representativos del capital social de sociedades de inversión en instrumentos de deuda, cuyas características específicas preserven cuando menos, su valor adquisitivo conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, de conformidad con lo que determine la Comisión a través de reglas de carácter general.

Las Federaciones respectivas deberán entregar al Comité Técnico la información que éste requiera para determinar las aportaciones, de conformidad con el artículo 111, fracción I, de esta Ley.

El Comité Técnico podrá acordar la suspensión temporal del pago de las aportaciones al Fondo de Protección, cuando los recursos que integren el mismo representen cuando menos el cinco por ciento del total de depósitos de dinero de todas las Entidades que estén protegidos por dicho Fondo.

Artículo 109

En el contrato de fideicomiso respectivo deberá preverse que para el cumplimiento de sus fines, el fiduciario tendrá, sin perjuicio de las demás atribuciones y obligaciones que las leyes le establecen, las siguientes:

I. Pagar hasta donde alcancen los recursos del Fondo, en forma subsidiaria, los depósitos de dinero a cargo de las Entidades, con los límites y condiciones a que se refiere esta Ley y los que se establezcan en las disposiciones de carácter general que emita la Comisión y en el propio contrato de fideicomiso;

II. Absorber los costos que se deriven de la aplicación de alguno de los mecanismos dispuestos en el artículo 90;

III. Realizar las operaciones y contratos de carácter mercantil o civil que sean necesarios para el cumplimiento del objeto del Fideicomiso;

IV. Coordinar, y en su caso, participar en procesos de fusión, escisión, venta, disolución y liquidación de las Entidades;

V. Comunicar a la Comisión y a la Federación respectiva las irregularidades que por razón de sus competencias les corresponda conocer;

VI. Otorgar financiamiento a las Entidades en los términos de esta Ley, como parte de los apoyos de liquidez a que se refiere el artículo 106, y

VII. Las demás que ésta y otras leyes prevean para el cumplimiento de su objeto.

Artículo 110

El Comité Técnico deberá estar integrado por cinco miembros propietarios y sus respectivos suplentes, que serán designados por el consejo de administración de la Confederación y aprobados por la asamblea general de la misma. Las Entidades podrán

estar representadas en dicho Comité Técnico hasta por un máximo de tres miembros, cada uno debiendo representar a Entidades distintas.

El nombramiento de los miembros del Comité Técnico sólo podrá recaer en personas que reúnan los requisitos que fije la Comisión mediante reglas de carácter general.

Artículo 111

El Comité Técnico tendrá las siguientes facultades:

I. Calcular mensualmente el monto de las aportaciones que se pagarán para la constitución e integración del Fondo de Protección;

II. Instruir al fiduciario, sobre los valores gubernamentales de amplia liquidez o los títulos representativos del capital social de sociedades de inversión en instrumentos de deuda, en los que deberá invertir los recursos del Fideicomiso en términos del artículo 108, segundo párrafo;

III. Evaluar periódicamente los aspectos operativos del Fideicomiso;

IV. Revisar y aprobar, en su caso, los informes que rinda el fiduciario sobre el manejo del patrimonio fideicomitado;

V. Hacer públicas las bases conforme a las cuales se procederá a pagar a los ahorradores, en los casos en que sea procedente dicho pago;

VI. Nombrar a las personas que se encargarán de la administración de la Entidad en sustitución del consejo de administración y del director o gerente general en el supuesto previsto en los artículos 75 y 77, quienes deberán cumplir con los requisitos que se refieren los artículos 20 y 23, respectivamente;

VII. Aprobar los casos en que proceda otorgar apoyos financieros a las Entidades en los términos del artículo 92 y 106;

VIII. Seleccionar alguno de los mecanismos a que se refiere la Sección Quinta, Capítulo II, Título Tercero de esta Ley, que corresponda en su caso a la Entidad;

IX. Determinar la forma y términos en que se ejercerán en su caso, los derechos corporativos y patrimoniales inherentes a los títulos a que se refiere el artículo 92;

X. Proponer o designar, en su caso, al liquidador o síndico, en caso de que una Entidad se encuentre en estado de liquidación o concurso mercantil, y

XI. Las demás que ésta y otras leyes prevean para el cumplimiento de su objeto, así como las que se prevean en el contrato constitutivo del Fondo.

Artículo 112

Cuando alguna Entidad no cumpla en tiempo y forma con las aportaciones fijadas por el Comité Técnico del Fondo, deberá pagar los intereses moratorios que se establezcan en el contrato de fideicomiso correspondiente.

Para el cálculo de los intereses señalados, se deberá considerar por lo menos el interés que hubiesen generado las aportaciones no pagadas si se hubiesen aportado al Fondo de Protección.

Artículo 113

Las Confederaciones, deberán informar mensualmente a la Comisión y a los ahorradores mediante avisos colocados en un lugar visible de las sucursales de las Entidades, sobre el estado que guarde el Fondo de Protección cuya vigilancia les haya sido encomendada, así como de los pagos que se hayan tenido que efectuar con arreglo a este Capítulo.

Artículo 114

El Comité Técnico del Fondo podrá solicitar al Comité de Supervisión de la Federación que realice las visitas de inspección necesarias, a efecto de constatar la situación

financiera, contable y legal de la o las Entidades participantes en los mecanismos a que se refiere el artículo 90.

Artículo 115

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 106, se considerará el principal y los accesorios del depósito de dinero en cuestión que no hubieren sido pagados, independientemente de las tasas de interés pactadas para los depósitos de dinero a cargo de la Entidad, y descontando el saldo insoluto de los créditos con respecto de los cuales sea titular el ahorrador.

El monto a ser pagado a cada depositante de acuerdo a lo establecido en este Capítulo quedará fijado en unidades de inversión a partir de la fecha en que se declare la disolución y liquidación de la Entidad o se decrete su concurso mercantil. El pago de los depósitos se realizará en moneda nacional, por lo que la conversión del monto denominado en unidades de inversión se efectuará utilizando el valor vigente de la citada unidad en la fecha en que se cubra el pago correspondiente.

En caso de que un ahorrador tenga más de una cuenta en una misma Entidad y la suma de los saldos de éstas excediera la cantidad señalada en el artículo 106, el Fondo de Protección únicamente procurará cubrir dicho monto de cobertura, dividiéndolo a prorrata entre el número de cuentas.

La forma y términos en que se cubrirán las cantidades que correspondan se establecerán en las reglas de carácter general que al efecto emita la Comisión.

TÍTULO CUARTO

De la Regulación Prudencial y de la Contabilidad

Capítulo I

De la Regulación Prudencial

Artículo 116

La Comisión emitirá lineamientos mínimos de regulación prudencial a los que deberán sujetarse las Entidades, en temas tales como provisionamiento de cartera, coeficientes de liquidez, las inversiones en obras de beneficio mayoritario, administración integral de riesgos, controles internos, procesos crediticios, mejores prácticas financieras y aquellos otros que juzgue convenientes para proveer a la solvencia financiera y la adecuada operación de las Entidades. También emitirá reglas relativas al capital mínimo que deberán mantener las Entidades, así como los requerimientos de capitalización aplicables en función de los riesgos de crédito y, en su caso, de mercado en que incurran las Entidades.

Asimismo la Comisión también estará facultada para establecer las bases sobre las cuales deberán invertirse los excedentes de captación que tengan las Entidades del Nivel de Operaciones IV, así como para determinar la parte de los pasivos que deberá estar invertida en depósitos de efectivo, en valores de amplio mercado o en ambos tipos de inversiones.

Las Federaciones y Confederaciones deberán considerar como mínimo dichos lineamientos y reglas al momento de establecer las reglas prudenciales a que deberán sujetarse sus afiliadas y en su caso, las no afiliadas.

Capítulo II

De la Contabilidad

Artículo 117

Todo acto o contrato que signifique variación en el activo, en el pasivo, en resultados o capital de una Entidad, o implique obligación directa o contingente, deberá ser registrado en la contabilidad. La contabilidad, los libros, y demás documentos correspondientes, así como el plazo que deberán conservarse se regirán por las reglas de carácter prudencial que al efecto expida la Comisión.

Las Entidades podrán microfilmear o grabar en cualquier medio que les autorice la Comisión, todos aquellos libros, registros y documentos en general que obren en su poder relacionados con los actos de la propia Entidad, de acuerdo a las bases técnicas que para la microfilmación o grabación, su manejo y conservación establezca la Comisión.

Los negativos originales de cámara o las imágenes grabadas por cualquier otro medio autorizado por la Comisión, obtenidos de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, así como las impresiones obtenidas de dichos sistemas o medios, debidamente certificadas por el funcionario autorizado de la Entidad, tendrán en juicio el mismo valor probatorio que los libros, registros y documentos microfilmados o conservados a través de cualquier otro medio autorizado.

Artículo 118

La Comisión, mediante disposiciones de carácter general, quedará facultada para establecer la forma y los términos en que las Entidades deberán presentar y, en su caso, publicar sus estados financieros. La formulación y difusión de tales estados financieros será bajo la responsabilidad del consejo de administración de las Entidades, quien deberá cuidar que éstos revelen la verdadera situación financiera de la Entidad, y quedará sujeto a las sanciones correspondientes en el caso de que las publicaciones no se ajusten a esa situación.

Dichos estados financieros deberán ser presentados a la Federación que la supervise de manera auxiliar, junto con la información que dicha Federación les solicite al respecto, con la anticipación que determine la Comisión en reglas de carácter general.

La Federación, o en su caso la Comisión, podrán ordenar que se publiquen las correcciones a los estados financieros que considere necesarias, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la resolución o del acuerdo correspondiente.

Artículo 119

Los estados financieros anuales de las Entidades deberán ser dictaminados a su costa por un auditor externo independiente, quien será designado por la Entidad supervisada. El Comité de Supervisión tendrá la facultad de veto respecto a la designación efectuada. La Comisión en disposiciones de carácter general podrá eximir de dicho dictamen a las Entidades que tengan asignado los Niveles de Operaciones I y II.

El mencionado auditor, deberá comunicar a la Federación sobre los informes y demás elementos de juicio en los que sustente sus dictámenes. Si durante o como resultado de la auditoría, se encontraren irregularidades que afecten la estabilidad y solvencia de las Entidades, el auditor estará obligado a comunicar dicha situación a la Comisión y al Comité de Supervisión de la Federación. La propia Comisión mediante disposiciones de carácter general, podrá establecer las características y requisitos que deberán cumplir los auditores externos, así como el alcance mínimo de sus dictámenes.

TÍTULO QUINTO

De las Facultades de las Autoridades

Capítulo Único

Artículo 120

La Comisión tendrá además de las facultades que se le atribuyen en otros artículos de esta Ley, las que se señalan en este Capítulo.

Las Entidades, Federaciones y Confederaciones, deberán proporcionar a la Comisión toda la información que ésta les requiera para el adecuado cumplimiento de su tarea de supervisión.

Asimismo, la Comisión deberá solicitar la opinión de la Secretaría en relación con las disposiciones que aquélla emita en materia de créditos con partes relacionadas y requerimientos de capitalización; y del Banco de México, en materia de coeficientes de liquidez y operaciones en moneda extranjera. Asimismo, cuando para el mejor cumplimiento de las atribuciones que le confiere la presente Ley, lo estime conveniente podrá solicitar la opinión de las mismas.

Artículo 121

La documentación que utilicen las Entidades, Federaciones y Confederaciones relacionada con su objeto, deberá sujetarse a las disposiciones de esta Ley, las que emanen de ella y las demás que le sean aplicables. La Comisión podrá objetar en todo tiempo la utilización de la mencionada documentación, cuando a su juicio ésta implique inexactitud, oscuridad o por cualquier otra circunstancia que pueda inducir a error, respecto de sus operaciones y servicios.

La Comisión podrá ordenar la suspensión de publicidad que realicen los sujetos de esta Ley, cuando a su juicio ésta implique inexactitud, oscuridad o competencia desleal entre las mismas, o que por cualquier otra circunstancia pueda inducir a error, respecto de sus operaciones y servicios.

Artículo 122

La Comisión podrá en todo tiempo acordar que se proceda a la remoción, de los miembros del consejo de administración, directores o gerentes generales, miembros del consejo de vigilancia o comisario, contralor normativo, miembros del Comité de supervisión, directores, gerentes o quienes ejerzan sus funciones en los términos de esta Ley, así como las demás personas que con sus actos puedan obligar a las Federaciones y Confederaciones, cuando considere que tales personas no cuentan con la suficiente calidad técnica o moral para el desempeño de sus funciones, no reúnan los requisitos al efecto establecidos o incurran de manera grave o reiterada en infracciones a la presente Ley y a las disposiciones de carácter general que de ella deriven.

La propia Comisión podrá además, con acuerdo de su Junta de Gobierno, en el último supuesto señalado en el párrafo anterior, inhabilitar a las personas citadas para desempeñar un empleo, cargo, mandato o comisión en cualquiera de las Entidades u Organismos de Integración sujetos a esta Ley, sin perjuicio de las sanciones que conforme a éste u otros ordenamientos legales fueren aplicables.

Para imponer la inhabilitación la Comisión deberá tomar en cuenta:

- I. La gravedad de la infracción y la conveniencia de evitar estas prácticas;
- II. El nivel jerárquico, los antecedentes, la antigüedad y las condiciones del infractor;
- III. El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivados de la infracción, y
- IV. La reincidencia.

Para la amonestación, suspensión, remoción, veto e inhabilitación, la Comisión deberá oír previamente al interesado y al representante de la Entidad, Federación o Confederación, según se trate.

Las resoluciones de la Comisión a que se refiere este artículo podrán ser recurridas ante la Secretaría dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que la misma se hubiere notificado. La Secretaría podrá revocar, modificar o confirmar, la resolución recurrida, con audiencia de las partes.

Artículo 123

En los términos de la fracción VII del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría y de la Comisión, celebrará convenios con las Entidades Federativas, a efecto de que éstas ejerzan las funciones que se acuerde para el cumplimiento de esta Ley.

Artículo 124

La Secretaría dictará disposiciones de carácter general que tengan como finalidad establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar en las Entidades, actos u operaciones que puedan ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del Código Penal Federal, incluyendo la obligación de dichas Entidades de presentar a esa Secretaría, reportes sobre las operaciones y servicios que realicen con sus Socios o Clientes, por los montos y en los supuestos que en dichas disposiciones de carácter general se establezcan.

Dichas disposiciones deberán considerar, entre otros aspectos, criterios para la adecuada identificación de los Socios o Clientes, de las operaciones y servicios de las Entidades mencionadas, que tomen en cuenta sus condiciones específicas y actividad económica o profesional; los montos, frecuencia, tipos y naturaleza de las operaciones y los instrumentos monetarios con que las realicen, y su relación con las actividades de los Socios o Clientes; las plazas en que operen, y los usos y prácticas prevalecientes en el mercado; la debida y oportuna capacitación de su personal; y medidas específicas de seguridad en el manejo de las operaciones de las propias Entidades. El cumplimiento de la obligación de

presentar reportes previstos en tales disposiciones, no implicará transgresión a lo establecido en el artículo 34 de esta Ley.

Las disposiciones señaladas deberán ser observadas oportunamente por los miembros de los consejos de administración, consejos de vigilancia o comisarios, del Comité de Supervisión, auditores externos, funcionarios y empleados de las Entidades. La violación de las mismas, será sancionada por la Comisión de conformidad con lo establecido en el presente Título.

Tanto los servidores públicos de la Secretaría y de la Comisión, como los miembros de los consejos de administración, consejos de vigilancia o comisarios, del Comité de Supervisión, auditores externos, funcionarios y empleados de las Entidades y, en su caso, de los Organismos de Integración, deberán abstenerse de dar noticia o información de las operaciones previstas en el presente artículo, a personas, Dependencias o Entidades distintas de las autoridades competentes expresamente previstas. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes.

TÍTULO SEXTO

De las Sanciones, Penas Convencionales y Delitos

Capítulo I

De las Sanciones y Penas Convencionales

Artículo 125

El incumplimiento o la violación a las normas de la presente Ley y a las disposiciones que emanen de ella, serán sancionados con multa que impondrá administrativamente la Comisión y se hará efectiva por la Secretaría. Corresponderá a la Junta de Gobierno de la Comisión la imposición de sanciones, la que podrá delegar esta atribución en el presidente y los demás servidores públicos de la misma, en razón de la naturaleza de la

infracción o del monto de las multas y tendrá asimismo la facultad indelegable de condonar, en su caso, total o parcialmente las multas impuestas.

Para efectos de las multas establecidas en el presente Capítulo se entenderá por días de salario, el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

En caso de reincidencia, se podrá aplicar multa equivalente al doble de la establecida para esa infracción.

Las Federaciones en su reglamento interior a que se refiere el artículo 55, establecerán penas convencionales a aplicarse a las Entidades afiliadas o sobre las que se ejerzan la función de supervisión auxiliar, en los términos estipulados con tales Entidades en el contrato respectivo. Dichas penas convencionales deberán ajustarse a los parámetros dispuestos en el presente Capítulo. A un solo acto u omisión de una Entidad no podrá aplicarse pena convencional y además las multas a que se refieren los artículos siguientes, por lo que las Federaciones y Comisión estarán coordinadas para el ejercicio de sus facultades.

Artículo 126

Para la aplicación de las penas convencionales por parte de las Federaciones, así como de las multas previstas en este Capítulo, la Federación o, en su caso la Comisión, según se trate, deberán oír previamente al interesado y tomar en cuenta la importancia de la infracción, las condiciones del infractor y la conveniencia de evitar prácticas tendientes a contravenir las disposiciones de esta Ley.

Artículo 127

Las penas convencionales y multas deberán ser pagadas dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. En caso de que el interesado promueva cualquier medio de defensa establecido, y la pena o multa resultare confirmada total o parcialmente, según lo que proceda, su importe deberá ser cubierto inmediatamente una vez notificado de la resolución correspondiente.

Artículo 128

En contra de las multas impuestas por la Comisión procederá el recurso de revocación, mismo que deberá interponerse por escrito dentro de los quince días hábiles siguientes al de su notificación y deberá agotarse antes de proceder por cualquier otro medio de impugnación.

Este recurso deberá interponerse ante la Comisión. En el escrito de impugnación, deberán expresarse el acto impugnado y los agravios que el mismo cause, ofreciendo en caso de contar con ellas, las pruebas que se juzguen convenientes.

Los actos y resoluciones de la Comisión podrán ser recurridos por los interesados, en los términos previstos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con excepción del Recurso de Revocación relativo a multas en el que será aplicable el Código Fiscal de la Federación, en su parte conducente.

Artículo 129

Cuando no se expresen en el mencionado escrito el acto reclamado o los agravios causados, la autoridad competente podrá desechar por improcedente el recurso interpuesto. Si se omitieron las pruebas, se tendrán por no ofrecidas.

La resolución del recurso de revocación podrá ser: desechar por improcedencia, confirmar o mandar reponerlo por uno nuevo que lo sustituya, o revocar el acto impugnado, y deberá ser emitida en un plazo que no exceda a cuarenta y cinco días hábiles posteriores a aquél en que se interpuso el recurso cuando deba ser resuelto por el presidente de la

Comisión, ni de sesenta días hábiles cuando se trate de recursos competencia de la Junta de Gobierno.

Lo dispuesto en este Capítulo, no excluye al infractor de la imposición de sanciones que conforme a ésta u otras leyes le fueren aplicables por la comisión de delitos.

Artículo 130

El incumplimiento a las disposiciones de la presente Ley, se sancionará con la imposición de las multas a que se refiere este Capítulo conforme a lo siguiente:

I. De 100 a 500 días de salario a las Entidades y Federaciones que no cumplan con el pago de las aportaciones fijadas por la asamblea general de afiliadas de la Federación, y en su caso de la Confederación, para el sostenimiento de las mismas;

II. De 100 a 500 días de salario a las Entidades que incumplan con los requerimientos, solicitudes de informes, acuerdos o resoluciones dictadas por la Federación, en el curso de los procedimientos de amigable composición y juicio arbitral de estricto derecho. En el caso del cumplimiento de resoluciones en amigable composición o en juicio arbitral, se entenderá que la Entidad incumple cuando transcurran quince días hábiles sin que hubiere ejecutado la resolución respectiva;

III. De 200 a 500 días de salario a las Entidades y Federaciones que no presenten a tiempo sus informes o la información requerida, por las Federaciones o Confederaciones;

IV. De 300 a 3,000 días de salario a las Entidades, Federaciones o Confederaciones que hagan caso omiso de los requerimientos de la Comisión o de la Secretaría a que se refiere esta Ley;

V. De 500 a 2,000 días de salario a las Entidades que no cumplan con las aportaciones para cubrir el Fondo de Protección;

VI. De 500 a 2,000 días de salario a las Entidades, Federaciones o Confederaciones que realicen publicidad engañosa o confusa;

VII. De 500 a 3,000 días de salario a las Entidades que obstaculicen las facultades que esta Ley y otras disposiciones aplicables le confieren a la Secretaría o a la Comisión;

VIII. De 500 a 4,000 días de salario a las Entidades que realicen operaciones prohibidas o distintas a las que les corresponden, de conformidad con el Nivel de Operaciones que le hubiera asignado la Comisión;

IX. De 500 a 3,000 días de salario a las Entidades, Federaciones o Confederaciones que no cumplan con los servicios y operaciones que se hayan pactado con sus Socios o Clientes, Entidades o Federaciones, según sea el caso;

X. De 500 a 4,000 días de salario a las Federaciones o Confederaciones que realicen actividades distintas a las de su objeto;

XI. De 1,000 a 2,000 días de salario a las Entidades que no lleven su contabilidad de acuerdo con los términos fijados por la Comisión;

XII. De 1,000 a 3,000 días de salario por el uso de las palabras a que se refiere el artículo 6o. de esta Ley, en el nombre de personas morales y establecimientos distintos a los autorizados para ello conforme al mismo precepto, y

XIII. De 1,000 a 3,000 días de salario a las Entidades, Federaciones y Confederaciones que no permitan las visitas de inspección de las Federaciones o de la Comisión, según se trate, o bien que obstruyan las labores de supervisión.

Artículo 131

A las Federaciones que no cumplan con lo señalado en la presente Ley, se les impondrán las sanciones siguientes:

I. De 1,000 a 5,000 días de salario a las Federaciones que omitan aplicar a las Entidades las penas convencionales que correspondan en los términos del contrato respectivo;

- II. De 3,000 a 6,000 días de salario a las Federaciones que oculten u omitan informar a la autoridad de problemas de insolvencia o liquidez por parte de las Entidades;
- III. De 5,000 a 10,000 días de salario a las Federaciones que emitan dictamen favorable a favor de sociedades que no cumplen con los requisitos de esta Ley. La misma sanción se aplicará a las Confederaciones que afilien a Federaciones no autorizadas por la Comisión;
- IV. De 5,000 a 10,000 días de salario a las Federaciones que no presenten los informes periódicos que la Comisión establezca en las disposiciones de carácter general respecto de las Entidades que supervisa;
- V. De 5,000 a 10,000 días de salario a las Federaciones que no lleven a cabo las auditorías a los estados financieros de las Entidades en los términos señalados por esta Ley y las disposiciones que de ella emanen;
- VI. De 1,000 a 5,000 días de salario al contralor normativo que no lleve a cabo las funciones de vigilancia conforme a lo que establece esta Ley;
- Igual sanción se impondrá a la Federación o Confederación que por cualquier medio impida que el contralor normativo realice sus funciones de conformidad a lo previsto en esta Ley, y
- VII. De 1,000 a 5,000 días de salario al consejero independiente que actúe en las sesiones del consejo de administración en contravención a la presente Ley y a las disposiciones que emanen de ella.

Artículo 132

Se sancionará con multa de 1,000 a 5,000 días de salario a los notarios, registradores, o corredores públicos que tramiten o inscriban actos que incluyan operaciones prohibidas por esta Ley, o bien autoricen la celebración de operaciones reguladas por esta Ley a personas distintas a las Entidades, Federaciones y Confederaciones. La misma multa se impondrá cuando las personas mencionadas con anterioridad, actúen sin que medie la autorización de la Comisión para los casos en que ésta sea necesaria.

Capítulo II De los Delitos

Artículo 133

Se impondrá pena de prisión de 2 a 10 años y multa hasta de 5,000 días de salario a los funcionarios, integrantes de los órganos de administración o empleados de las Entidades, Federaciones o Confederaciones que causen un perjuicio económico a algún Socio o Cliente por haber dispuesto para sí o para otro de la información a la que tiene acceso. Quien cometa esta conducta será responsable de cubrir los daños y perjuicios que hubiere causado.

Se impondrá hasta el doble de la pena antes señalada a los funcionarios antes mencionados o miembros del Comité Técnico que dispongan indebidamente para sí o para otro de los recursos que integran el Fondo y causen un perjuicio económico a los socios o clientes.

Artículo 134

Se impondrá pena de prisión de 6 meses a 5 años y multa hasta de 2,000 días de salario:

- I. A las personas que con el objeto de obtener un crédito, proporcionen a una Entidad datos falsos sobre sus activos o pasivos;
- II. A los funcionarios, integrantes de los órganos de administración o empleados de las Entidades que conociendo la falsedad sobre el monto de los activos o pasivos de algún integrante, autoricen u otorguen un crédito;

III. A los funcionarios, integrantes de los órganos de administración o empleados de las Entidades, Federaciones o Confederaciones, que falsifiquen o alteren los estados financieros de las Entidades, y

IV. A los funcionarios, integrantes de los órganos de administración o empleados de las Entidades que hayan sido sancionadas con anterioridad por no proporcionar los estados financieros o la información requerida por la Federación o por la Comisión para sus labores de supervisión y vigilancia; y vuelvan a cometer dicha conducta. La misma pena se aplicará a quienes proporcionen dolosamente información falsa, imprecisa o incompleta.

Artículo 135

Se impondrá pena de prisión de 6 meses a 5 años y multa hasta de 2,000 días de salario a los funcionarios de las Entidades que otorguen créditos a personas físicas o morales cuya insolvencia sea conocida. La misma pena se impondrá a los funcionarios de las Entidades que renueven los créditos vencidos a los Socios o Clientes que se encuentren en estado de insolvencia.

Artículo 136

Se impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y multa hasta de 1,000 días de salario a los funcionarios, integrantes de los órganos de administración o empleados de las Entidades, Federaciones o Confederaciones que hayan sido beneficiados por su participación en el otorgamiento de créditos o que soliciten dinero o cualquier otra cosa para agilizar la tramitación o aprobación de algún crédito o servicio que se ofrezca.

Artículo 137

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se entenderá que las Entidades y los Organismos de Integración forman parte del Sistema Financiero, por lo que serán aplicables a dichos sujetos las sanciones previstas en dicho artículo.

Artículo 138

Se impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y multa hasta de 5,000 días de salario a la persona física o a los consejeros, funcionarios y administradores de las personas morales que capten recursos del público en contravención de lo dispuesto por el artículo 7o. de esta Ley. Este delito se perseguirá únicamente mediante querrela.

Para determinar la comisión de este delito, la autoridad competente podrá revisar la contabilidad y demás documentación de la negociación, empresa o establecimiento de la persona física o moral, a las operaciones mencionadas, en cuyo caso, ordenará la suspensión inmediata de operaciones y procederá a la clausura de la negociación, empresa o establecimiento de la persona física o moral de que se trate. El procedimiento de inspección, suspensión de operaciones y clausura anterior es de interés público.

Artículo 139

Serán sancionados los servidores públicos de la Comisión con la pena establecida para los delitos correspondientes más una mitad, según se trate de los delitos previstos en el presente Capítulo, que:

a) Oculten al conocimiento de sus superiores hechos que probablemente puedan constituir delito;

- b) Permitan a los funcionarios o empleados de las Entidades, Federaciones o Confederaciones, alteren o modifiquen registros con el propósito de ocultar hechos que probablemente puedan constituir delito;
- c) Obtengan o pretendan obtener un beneficio a cambio de abstenerse informar a sus superiores hechos que probablemente puedan constituir delito;
- d) Ordenen o inciten a sus inferiores a alterar informes con el fin de ocultar hechos que probablemente puedan constituir delito, o
- e) Inciten u ordenen no presentar la petición correspondiente, a quien esté facultado para ello.

TRANSITORIOS

Artículo Primero

El artículo Primero del presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo señalado en los artículos Transitorios siguientes.

El artículo Segundo del presente Decreto entrará en vigor a los dos años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El artículo Tercero del presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción del artículo 26 contenido en el mismo, el cual entrará en vigor a los dos años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo

Las Sociedades de Ahorro y Préstamo, las Uniones de Crédito y las Sociedades Cooperativas que tengan intención de sujetarse a los términos establecidos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, deberán registrarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en un término no mayor a seis meses contados a partir de la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación, manifestando al efecto su nombre, denominación, domicilio, número de socios y demás datos que sobre su actividad solicite dicho organismo.

Artículo Tercero

Las Sociedades de Ahorro y Préstamo, las Uniones de Crédito que capten depósitos de ahorro, así como las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y aquéllas que cuenten con secciones de ahorro y préstamo, constituidas con anterioridad al inicio de la vigencia de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, contarán con un plazo de dos años a partir de la fecha que establece el primer párrafo del artículo PRIMERO Transitorio anterior para solicitar de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la autorización para operar como Entidad, sujetándose a lo dispuesto por el artículo OCTAVO Transitorio y debiendo obtener el dictamen favorable de alguna Federación, con arreglo a lo dispuesto por la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Concluido el plazo anterior, las sociedades y las Uniones de Crédito que no hubieren obtenido la autorización referida deberán abstenerse de captar recursos, en caso contrario se ubicarán en los supuestos de infracción previstos por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y por las disposiciones que resulten aplicables.

Artículo Cuarto

Las Sociedades de Ahorro y Préstamo y las Uniones de Crédito que capten depósitos de ahorro continuarán sujetas a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria

y de Valores, en términos de lo establecido en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, hasta en tanto no se sujeten a lo señalado en el artículo TERCERO Transitorio.

Artículo Quinto

Los Organismos de Integración que sean autorizados conforme a la Ley de Ahorro y Crédito Popular dentro del plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la misma, contarán con un plazo de dos años a partir de su autorización, para cumplir con el número mínimo de diez Entidades y cinco Federaciones afiliadas, en términos del artículo 53 de la misma ley, según se trate.

Artículo Sexto

Sin menoscabo de lo establecido en el artículo 5o. de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, el Gobierno Federal podrá entregar recursos a los Fondos de Protección conforme se integren las Entidades a los mismos y en función del monto de los ahorradores de las Entidades. Dicha aportación será por única vez y a través de los mecanismos que para tal efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los recursos a que hace referencia el párrafo anterior, no serán aplicables a las Entidades señaladas en el quinto párrafo del artículo 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Artículo Séptimo

Las Entidades autorizadas en los primeros dos años a partir de la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, podrán utilizar los recursos del Fondo de Protección, siempre y cuando hayan realizado aportaciones durante un plazo de 2 años.

Respecto de aquéllas que se constituyan con posterioridad a los dos primeros años de entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, podrán utilizar los recursos del Fondo de Protección a partir del cuarto año siguiente a la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Lo dispuesto en este artículo deberá incluirse en el contrato de fideicomiso de los Fondos de Protección. Las Entidades deberán informar a sus Socios, Clientes y al público en general la fecha a partir de la cual iniciará la vigencia del sistema del Fondo de Protección respectivo, conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

Artículo Octavo

Para efectos de la fracción I del artículo 53 de la misma Ley, las Federaciones que soliciten su autorización dentro de un plazo de dos años contados a partir de la entrada en vigor de la Ley, deberán presentar los documentos en que, a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se manifieste la intención de cuando menos diez sociedades que cumplan con los requisitos del artículo 10o., con excepción de las fracciones II y IX, para afiliarse a dicha Federación.

Artículo Noveno

A partir de la fecha de inicio de vigencia establecida en el primer párrafo del artículo PRIMERO Transitorio, las Federaciones autorizadas administrarán de forma provisional los Fondos de Protección, hasta que dichas Federaciones formen parte de alguna Confederación autorizada o convengan con alguna de ellas el traspaso de los recursos que integran dichos fondos en los términos del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Concluido un plazo de dos años a partir del inicio de vigencia de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, las Federaciones que no se encuentren en los supuestos contemplados en el párrafo anterior, podrán solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores una

prórroga que no podrá exceder de dos años para continuar administrando el Fondo de Protección de sus Entidades, de lo contrario se ubicarán en la causal de revocación prevista por la fracción IX del artículo 60 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. En este último caso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con arreglo a las disposiciones de carácter general que emita al efecto, determinará el destino de los recursos que integran los Fondos de Protección respectivos.

Artículo Décimo

Al momento de instalarse el primer consejo de administración de una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo conforme a los términos previstos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se determinarán por insaculación a los consejeros electos por la asamblea que fungirán en su encargo únicamente durante la primera mitad del periodo de duración determinado por la Entidad, a fin de proceder en periodos subsecuentes a la renovación por mitad del consejo de administración.

Cuando el número de integrantes sea impar, se elegirá por insaculación durante la instalación del consejo de administración, al miembro excedente que formará parte de la primera mitad, a fin de proceder en periodos subsecuentes a la renovación parcial del mismo. En el caso del consejo de vigilancia, se procederá de la misma forma.

Artículo Décimo Primero

Para efectos de lo dispuesto en los artículos 65 y 101 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se establecerá un periodo de transición a efecto de que los Organismos de Integración se ajusten al mismo, conforme a lo siguiente:

- I. Durante los dos primeros años a partir de que obtengan el dictamen favorable, su consejo de administración podrá estar conformado hasta en un setenta y cinco por ciento del total de sus miembros, por consejeros o funcionarios de la Entidad, Federación o Confederación, según sea el caso, y
- II. A partir del segundo año y hasta el final del tercer año, dicho porcentaje se reducirá hasta un cincuenta por ciento y a partir del cuarto año este porcentaje podrá ser hasta de un treinta por ciento.

Artículo Décimo Segundo

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomará las medidas pertinentes y proveerá lo necesario en términos de las disposiciones aplicables, para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros estén en posibilidad de cumplir con las funciones conferidas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Artículo Décimo Tercero

Las solicitudes de autorización presentadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para constituir y operar Sociedades de Ahorro y Préstamo, y que no hayan sido resueltas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se entenderán resueltas en sentido negativo, por lo que los interesados correspondientes podrán iniciar el procedimiento para obtener la autorización a que se refiere el artículo 9o. de la misma Ley.

Las solicitudes a que hace referencia el párrafo anterior serán devueltas a los interesados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de un plazo que no excederá de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Décimo Cuarto

Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores contará con un plazo de ciento ochenta días naturales para emitir la resolución a que se refiere el artículo 9 de la Ley citada, respecto de las solicitudes de autorización para operar como Entidad que le sean remitidas por las Federaciones.

Artículo Décimo Quinto

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores contará con un plazo de 180 días naturales contados a partir de la publicación de este Decreto para emitir todas las reglas y disposiciones de carácter general que deban ser formuladas según se señala en la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Artículo Décimo Sexto

Se derogan todas las disposiciones que se opongan a esta Ley.

México, D.F., a 30 de abril de 2001.- Dip. Ricardo García Cervantes, Presidente.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Manuel Medellín Milán, Secretario.- Sen. Yolanda González Hernández, Secretaria.- Rúbricas".

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil uno.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.

4.25. NICARAGUA

LEY GENERAL DE COOPERATIVAS

LEY No. 499. Aprobada el 29 de Septiembre del 2004.

Publicada en La Gaceta No. 17 del 25 de Enero del 2005.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

Hace saber al pueblo nicaragüense que:

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

CONSIDERANDO

I

Que es responsabilidad del Estado la promoción y el desarrollo integral del país y velar por los intereses y las necesidades particulares, sociales, sectoriales y regionales de la nación.

II

Que es responsabilidad del Estado proteger, fomentar y promover las formas de propiedad y gestión económica del sector cooperativo, sobre quien descansa una de las principales actividades económicas del país y que requiere de un fortalecimiento que permita estimular su progreso, proporcionándoles un impulso más decidido dentro de la actividad socioeconómica de la nación que facilite el progreso del movimiento cooperativo.

III

Que las cooperativas se organicen bajo cualquiera de las formas previstas en la Ley y que gocen de igualdad de derechos que las demás empresas existentes en el país para garantizarles un pleno ejercicio de la libertad organizativa que demanda el movimiento cooperativo.

IV

Que corresponde al gobierno de la República, junto al movimiento cooperativo, promover la incorporación voluntaria de los nicaragüenses de los diferentes sectores económicos de la nación a organizarse en cooperativas para impulsar las actividades productivas del sector.

V

Que es responsabilidad del Estado, fomentar la educación cooperativa en todo el sistema educativo nacional sobre la base de los principios e idearios del cooperativismo universal, para contribuir a fortalecer una cultura de paz, justicia, equidad y solidaridad, en función del bien común de los cooperados y de la sociedad nicaragüense en general.

En uso de sus facultades;

HA DICTADO

La siguiente:

LEY GENERAL DE COOPERATIVAS

TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO ÚNICO

OBJETO DE LA LEY

Artículo 1.- La presente Ley establece el conjunto de normas jurídicas que regulan la promoción, constitución, autorización, funcionamiento, integración, disolución y liquidación de las cooperativas como personas de derecho cooperativo y de interés común y de sus interrelaciones dentro de ese sector de la economía nacional.

Artículo 2.- Declárese de interés económico y social de la nación, la promoción, fomento y protección del movimiento cooperativo como instrumento eficaz para el desarrollo del sector cooperativo, contribuyendo así al desarrollo de la democracia participativa y la justicia social.

Artículo 3.- Es deber del Estado garantizar y fomentar la libre promoción, el desarrollo, la educación y la autonomía de las cooperativas y sus organizaciones y el esfuerzo mutuo para realizar actividades socio económicas y culturales, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas de sus asociados y de la comunidad.

TÍTULO PRIMERO

DE LAS COOPERATIVAS

CAPÍTULO

I

DEFINICIONES Y PRINCIPIOS

Artículo 4.- Derecho cooperativo, es el conjunto de normas jurídicas especiales, jurisprudencia, doctrina y prácticas basadas en los principios que determinan y condicionan las actuaciones de los organismos cooperativos y los sujetos que en ellos participan.

Artículo 5.-. Cooperativa, es una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada.

Artículo 6.- Acuerdo cooperativo, es la voluntad manifiesta de un grupo de personas para constituirse en empresa cooperativa, que satisfagan las necesidades e intereses comunes de sus asociados.

Artículo 7.- Son actos cooperativos, los que realizan entre sí los socios y las cooperativas, en cumplimiento de sus objetivos, las relaciones de las cooperativas con terceras personas no sujetas a esta Ley, no son actos cooperativos y se regirán por la legislación correspondiente.

Artículo 8.- Las cooperativas se rigen por los siguientes principios:

- a) Libre ingreso y retiro voluntario de los asociados.
- b) Voluntariedad solidaria, que implica compromiso recíproco y su cumplimiento y prácticas leales.
- c)Control democrático: Un asociado, un voto.
- d) Limitación de interés a las aportaciones de los asociados, si se reconociera alguno.
- e) Equidad, que implica la distribución de excedentes en proporción directa con la participación en las operaciones.
- f)Respeto y defensa de su autonomía e independencia.
- g)Educación-cooperativa.
- h)Fomento de la cooperación entre cooperativas.

i) Solidaridad entre los asociados.

j) Igualdad en derecho y oportunidades para asociados de ambos sexos.

CAPÍTULO II

DE LA CONSTITUCIÓN, FORMALIDADES Y AUTORIZACIÓN

Artículo 9.- Las cooperativas se constituirán mediante documento privado, confirmas autenticadas por Notario Público.

Artículo 10.- La constitución de las cooperativas será decidida por Asamblea General de Asociados, en la que se aprobará su Estatuto, se suscribirán las aportaciones y se elegirán los miembros de los órganos de dirección y control de las mismas. Al constituirse, los asociados, deberán tener pagado al menos un 25% del capital suscrito en el caso de las cooperativas tradicionales y de cogestión.

El acta de la Asamblea de Constitución contendrá el Estatuto, y deberá ser firmado por los asociados fundadores, anotando sus generales de ley y el valor respectivo de las aportaciones.

La autenticación notarial de las firmas a que se refiere el artículo anterior se hará por el notario en acta numerada de su protocolo, dando fe de conocimiento de los firmantes o de quienes firmen a su nombre y de sus generales de ley e indicando haber tenido a la vista la cédula de identidad u otro documento acreditativo de los interesados.

Artículo 11.- Las cooperativas deben reunir las siguientes condiciones y requisitos:

a) Número mínimo de asociados definidos por la presente Ley, el número máximo-es-ilimitado.

b) Duración indefinida.

c) Capital variable e ilimitado.

d) Neutralidad y no discriminación.

e) Responsabilidad limitada.

f) Responsabilidad de las reservas sociales, donaciones y financiamiento.

Artículo 12.- Las cooperativas pueden realizar toda clase de actividad en condiciones de igualdad con los sujetos de derecho privado y otras personas jurídicas y con los entes estatales en todas aquellas actividades relacionadas con las prestaciones de servicios públicos.

Artículo 13.- Las cooperativas pueden asociarse con personas de otro carácter jurídico, a condición que dicho vínculo sea conveniente para sus propósitos en la medida que no se desvirtúe su naturaleza ni transfieran beneficios, privilegios y exenciones que les sean propios.

Artículo 14.- De acuerdo a las disposiciones de la presente Ley, podrán organizarse cooperativas de todo tipo. Cuando una cooperativa abarque por lo menos dos sectores de

actividad económica, será una cooperativa multisectorial, cuando cumpla con dos o más funciones será multifuncional.

Las cooperativas podrán ser: de consumo, de ahorro y crédito, agrícolas, de producción y de trabajo, de vivienda, pesquera, de servicio público, culturales, escolares, juveniles y otras de interés de la población, sin que esta enumeración se considere limitada.

También pueden organizarse cooperativas de cogestión (composición paritaria de las instituciones) y de autogestión (participación total de los trabajadores) en la dirección y administración de la empresa, sea esta privada-o-estatal.

Las cooperativas de ahorro y crédito, en su actividad de brindar servicios financieros a sus asociados, gozarán de autonomía en la concepción y realización de su política de operaciones.

Las cooperativas que no sean de ahorro y crédito podrán realizar la actividad financiera de otorgar préstamos a sus asociados mediante secciones especializadas de crédito, bajo circunstancias especiales y cuando las condiciones sociales y económicas lo justifiquen.

Artículo 15.- Las cooperativas serán de responsabilidad limitada. Para los efectos de este artículo se limita la responsabilidad de los asociados al valor de sus aportes y la responsabilidad de la cooperativa para con terceros, al monto-del-patrimonio-social.

Artículo 16.- Para su identificación, las cooperativas deberán llevar al principio de su denominación social la palabra "cooperativa", seguido de la identificación de la naturaleza de la actividad principal y al final, las iniciales "R. L.", como indicativo de que la responsabilidad de los asociados es limitada.

Artículo 17.- Queda prohibida a las personas naturales o jurídicas no sujetas a las disposiciones de esta Ley, usar en su denominación o razón social, documentos, papelería, etcétera, las palabras cooperativa, cooperativo, cooperativista, cooperados, y otras similares que pudieran inducir a la creencia de que se trata de una organización cooperativa o del sector cooperativista.

Artículo 18.- A las cooperativas les será prohibido:

- a) Conceder ventajas, preferencias u otros privilegios a los fundadores, promotores, dirigentes o funcionarios, ni exigir a los nuevos miembros contribuciones económicas superiores a las establecidas en sus Estatutos.
- b) Permitir a terceros participar directa o indirectamente de los privilegios o beneficios que la Ley otorga a las cooperativas.
- c) Realizar actividades diferentes a las establecidas en el Estatuto y en perjuicio de los asociados y la comunidad.
- d) Integrar en sus cuerpos de dirección o control a personas que no sean asociados de la cooperativa.
- e) Transformarse en entidades de otra naturaleza jurídica. Toda decisión en este sentido es nula y quienes la adopten responderán personalmente.

f) Formar parte de entidades cuyos fines sean incompatibles con los de las cooperativas.

Artículo 19.- Las cooperativas para constituirse deberán tener un mínimo de asociados fundadores:

a) Las cooperativas de consumo, agrícolas, de producción y de trabajo, de vivienda, pesquera, de servicio público, culturales, escolares, juveniles y otras de interés de la población, requerirán de diez asociados.

b) Las cooperativas multisectoriales, cogestión y autogestión y las de ahorro y crédito, requerirán de veinte asociados.

Artículo 20.- El Estatuto de la cooperativa deberá tener como mínimo las siguientes disposiciones:

a) Razón social, domicilio, responsabilidad y ámbito territorial de operaciones.

b) Objeto del acuerdo cooperativo y enumeración de sus actividades.

c) Deberes y derechos de los asociados y las condiciones para su admisión.

d) Régimen de sanciones, causales y procedimientos.

e) Procedimiento para resolver diferencias o conflictos dirimibles entre los asociados o entre éstos y la cooperativa, por causa o por ocasión de actos cooperativos.

f) Régimen de organización interna, constitución, funciones de los órganos de dirección y control, incompatibilidades y forma de elección y remoción de sus miembros.

g) Convocatoria de asambleas ordinarias y extraordinarias.

h) Representación legal, funciones y responsabilidades.

i) Constitución e incremento patrimonial de la cooperativa, reserva y fondos sociales, finalidades y forma de utilización de los mismos.

j) Aportes sociales mínimos, forma de pago y devolución, procedimiento para el avalúo de los aportes en especie o en trabajo.

k) Forma de aplicación de los excedentes cooperativos. Las reglas para distribuir los excedentes de un determinado ejercicio económico.

l) Régimen económico de las cooperativas y de sus asociados.

m) Régimen educativo del cooperativismo.

n) Normas para la fusión, incorporación, integración, disolución y liquidación.

o) Normas y procedimientos para reformar su Estatuto. Podrá establecer normas del voto directo o por representación cuando la Cooperativa tenga más de cien asociados.

p) La forma de devolver el capital social a las personas que se retiren o sean excluidos de la cooperativa o cuando estos fallezcan, así como el régimen de transmisión de los certificados de aportación.

q) El destino de las reservas obligatorias y repartibles entre los asociados en caso de disolución y liquidación de la cooperativa.

r) La forma en que la cooperativa ejecutará sus programas de formación y capacitación, respetando el principio de igualdad y equidad de oportunidades para participar en los procesos de educación.

s) Las demás estipulaciones que se consideren necesarias para asegurar el adecuado cumplimiento del acuerdo cooperativo y que sean compatibles con sus propósitos.

Artículo 21.- Las reformas al Estatuto de la cooperativa deberán ser aprobadas en Asamblea General de Asociados y deberán inscribirse en el Registro Nacional de Cooperativas.

Artículo 22.- El Estatuto de la cooperativa será reglamentado por el Consejo de Administración, quien lo someterá para su aprobación ante la Asamblea General de Asociados. Esta aprobación deberá realizarse en los siguientes sesenta días después de haber obtenido la personalidad jurídica.

Artículo 23.- Para obtener la personalidad jurídica de una cooperativa son requisitos indispensables para los socios fundadores:

a) Hacer un curso de cuarenta horas de educación cooperativa impartido por instituciones o cooperativas de capacitación reconocidas por la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, quienes deberán extender el respectivo certificado.

b) Haber pagado un porcentaje no menor al 25% del capital social que suscribieron.

c) Presentar el respectivo estudio de viabilidad de la futura empresa cooperativa.

d) Presentar ante el Registro Nacional de Cooperativas el instrumento privado de Constitución, autenticadas las firmas por un Notario Público y sus Estatutos. El Registro realizará su inscripción en un plazo no mayor de treinta días a partir de la fecha de su presentación.

Artículo 24.- La negativa de inscripción se puede dar cuando en el instrumento constitutivo se omita alguno de los elementos establecidos en los artículos 19, 20 y cualquier otro que establezca la presente Ley. Si la omisión fuere subsanable, el registrador devolverá el expediente a la parte interesada para subsanar la omisión señalada, quince días después de finalizado el plazo establecido en el artículo 23, Inciso d) de la presente Ley.

Artículo 25.- Al inscribirse la cooperativa en el Registro Nacional de Cooperativas, se anotarán el instrumento constitutivo, los nombres de los asociados que integran los órganos de dirección y control y el de su representante legal, debidamente identificado.

Artículo 26.- Los actos celebrados y los documentos suscritos a nombre de la cooperativa antes de su constitución legal, salvo lo necesario para obtener la inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas, hacen solidariamente responsables a quienes los celebren o suscriban.'

Una vez inscrita la cooperativa, dichos actos deberán ser sometidos para su ratificación o no por la primera Asamblea General de Asociados.

Artículo 27.- De las resoluciones negativas de la Autoridad de Aplicación se establece el Recurso de Revisión en la vía administrativa. Este recurso deberá interponerse en el término de quince días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del acto. Es competente para conocer de este recurso la instancia responsable de dicha resolución.

El Recurso de Revisión se resolverá en un término de veinte días, a partir de la interposición del mismo.

Además el afectado podrá hacer uso del Recurso de Apelación, el que se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el acto, en un término de seis días después de notificado, éste remitirá el recurso junto con su informe, a su superior jerárquico en un término de diez días.

CAPÍTULO III

DE LOS ASOCIADOS

Artículo 28.- Podrán ser asociados de las cooperativas:

- a) Las personas naturales legalmente capaces, salvo los casos de las cooperativas juveniles.
- b) Las personas jurídicas públicas y privadas sin fines de lucro.
- c) Los extranjeros autorizados por las autoridades de Migración como residentes en el país, siempre y cuando el número de asociados extranjeros no sean mayor del 10 % del total de los socios al momento de constituirse. Cuando en la cooperativa el número de asociados extranjeros aumentare el porcentaje anterior, podrá la Autoridad de Aplicación intervenir dicha cooperativa.

Artículo 29.- Ninguna persona puede pertenecer simultáneamente a más de una cooperativa de la misma actividad, salvo en los casos de excepción que se determine en el Reglamento.

Artículo 30.- La calidad de asociados se adquiere mediante la participación en cumplimiento de los requisitos establecidos en el acto constitutivo.

En el caso nuevo ingreso, la aceptación o denegación del solicitante quedará sujeta a la aprobación de la Asamblea General de Asociados.

Artículo 31.- La persona que adquiera la calidad de asociado, conjuntamente con los demás miembros responderá de las obligaciones contraídas por la cooperativa antes de su ingreso a ella y hasta el momento que deje ser asociado, con sus aportes suscritos y

pagados.

Artículo 32.- Son deberes de los asociados, sin perjuicio de los demás que establezca la presente Ley, el Estatuto y el Reglamento de la cooperativa, los siguientes:

- a) Adquirir formación básica sobre legislación cooperativa y gestión empresarial, a través de cursos de capacitación, hasta completar cuarenta horas y someterse a los programas de capacitación periódicas que al efecto ejecute la cooperativa por medio de la Comisión de Formación Técnica y Promoción del Cooperativismo. Estos programas periódicos de capacitación no podrán ser menor a cinco horas semestrales.
- b) Cumplir las obligaciones sociales y pecuniarias derivadas del acuerdo cooperativo.
- c) Aceptar y cumplir las decisiones de la Asamblea General de Asociados y de los demás órganos de dirección y control de la cooperativa.
- d) Aceptar y desempeñar fiel y eficientemente los cargos para los que fueran electos.
- e) Comportarse solidariamente en sus relaciones con la cooperativa y sus asociados.
- f) Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que atenten contra la estabilidad económica o prestigio social de la cooperativa.
- g) Conservar el secreto sobre aquellos asuntos y datos de la cooperativa cuya divulgación pudieran perjudicar sus intereses, salvo que sea autorizado por la autoridad competente.
- h) Observar lealtad y fidelidad a la cooperativa, a sus Estatutos, Reglamento y normas que adopten y facilitan la información que la cooperativa le solicite en relación con sus necesidades de producción o de insumos que sirvan para planificar el trabajo.

Artículo 33.- Los asociados de la cooperativa tendrán los siguientes derechos, sin perjuicio de los demás que establezcan la presente Ley, el Estatuto y su Reglamento:

- a) Participar activamente en los actos de toma de decisiones y elecciones en la Asamblea General y demás órganos de dirección y control, haciendo uso del derecho de voz y voto.
- b) Proponer y ser propuesto para desempeñar cargos en el Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y otras comisiones o comités especiales que pudieran ser creados.
- c) Utilizar los servicios de la cooperativa y gozar de los beneficios económicos y sociales que ésta genere de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto y el Reglamento.
- d) Ser informado o solicitar información de la gestión de la cooperativa, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Estatuto.
- e) Fiscalizar la gestión de la cooperativa, formulando denuncias por incumplimiento de la ley, el Estatuto y el Reglamento ante la Junta de Vigilancia.
- f) Retirarse voluntariamente de la cooperativa, previo cumplimiento de los requisitos previstos en el Estatuto para tal fin.

g) Recibir educación sobre cooperativismo.

Artículo 34.- La calidad de asociado se pierde por:

a) Fin de la existencia de la persona natural o jurídica, sin perjuicio del derecho de los herederos o beneficiarios, en su caso, a manifestar su voluntad de seguir perteneciendo a la cooperativa.

b) Retiro-voluntario.

c) Pérdida de las condiciones establecidas por el Estatuto para ser asociado.

d) Por interdicción civil o pérdida de sus derechos civiles y políticos proveniente de una sentencia firme.

e) Incumplimiento de las actividades y obligaciones estatutarias y reglamentarias.

f) Expulsión.

Artículo 35.- Los asociados podrán ser expulsados o suspendidos de sus derechos por las causales estipuladas en el Estatuto y mediante los procedimientos establecidos en su Reglamento. La decisión le corresponde adoptarla al Consejo de Administración. En este caso, el socio puede solicitar la revisión ante esta misma instancia en un término de cinco días hábiles. Si la Junta Directiva ratificare la expulsión o sanción, el asociado podrá apelar dentro de tercero día ante la Asamblea General de Asociados, la que tendrá que resolver en un término no mayor de quince días.

Artículo 36.- Si la Asamblea General de Asociados no resolviera dentro del término señalado en el artículo anterior, la expulsión o sanción queda sin efecto. El apelante podrá recurrir de queja ante la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, dentro del plazo de cinco días. De no ser emitida, la expulsión o sanción quedará sin efecto.

Transcurrido el término señalado en el párrafo anterior y no habiendo cumplido el requerido con el ordenado, se le aplicará una multa de C\$ 100.00 (cien córdobas) por día transcurrido a la cooperativa, hasta por un período de diez días, los que serán pagados a favor de la Autoridad de Aplicación.

Artículo 37.- En caso de renuncia, suspensión o expulsión, los asociados tienen derecho al reembolso del valor nominal de sus aportaciones suscritas y pagadas y excedentes si los hubiere, siempre y cuando éstas no estén respaldando deudas, compromisos o créditos solidarios.

Artículo 38.- La cooperativa se reserva el derecho de la negociación o de pago diferido de las aportaciones y excedentes, si lo hubiere, cuando no lo permita la situación económico-financiera de ésta, sin perjuicio de las acciones legales que se deduzcan por el afectado, en caso de incumplimiento.

CAPÍTULO IV

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 39.- Los recursos de carácter patrimonial con los cuales pueden contar las cooperativas para el cumplimiento de sus objetivos socio-económicos son:

- a) Las aportaciones de los asociados, que constituyen el capital social.
- b) Las reservas y fondos permanentes.
- c) Los bienes adquiridos.
- d) Los auxilios, donaciones, subvenciones, asignaciones, préstamos, legados y otros recursos análogos provenientes de terceros. Estos recursos son irrepartibles.

Artículo 40.- Las aportaciones serán representadas mediante certificados de aportación que deberán ser nominativos, indivisibles y de igual valor y sólo transferibles entre asociados, sin perjuicio de los derechos sucesorios a quien tenga derecho y con acuerdo del Consejo de Administración, podrán ser entregadas en dinero, en especie o trabajo convencionalmente valuados, en la forma y plazo que establezca el Estatuto.

Artículo 41.- Los certificados de aportación contendrán las siguientes especificaciones:

- a) Nombre y domicilio de la cooperativa.
- b) Número y serie del certificado.
- c) Fecha de emisión.
- d) Nombre del asociado.
- e) Valor del certificado.
- f) Determinación del beneficiario o beneficiarios.
- g) Firmas y sellos del presidente y el secretario de la cooperativa.

Artículo 42.- Las aportaciones serán de dos tipos:

- a) Ordinarias: Aquellas en que los asociados están obligados a enterar de acuerdo a lo establecido en el Estatuto.
- b) Extraordinarias: Las que por acuerdo de la Asamblea General de Asociados se determinen para resolver situaciones especiales e imprevistos.

En ningún caso el asociado podrá tener más del 10% de aportaciones al capital social de la cooperativa.

Artículo 43.- Cuando el asociado adeude parte de las aportaciones suscritas, el excedente e intereses que le correspondan por los aportes de capital pagados, si los hubieren, serán aplicados a cubrir el saldo exigible.

Artículo 44.- Las aportaciones al capital suscritas y pagadas por los asociados, quedan

directamente afectadas desde su origen a favor de la cooperativa, como garantía de las obligaciones que ésta tenga o contraiga frente a terceros.

Las aportaciones de los socios y los ahorros de las cooperativas no podrán ser gravadas por sus titulares a favor de terceros y son inembargables por obligaciones personales de los asociados frente a terceros.

Artículo 45.- El Estatuto determinará si las aportaciones devengarán algún interés, si así fuere, éste no deberá ser mayor a la tasa de interés pasivo bancario.

En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, si las aportaciones devengaren algún interés éste se fijará en las políticas que se establezcan y aprueben por el Consejo de Administración y sujeto a ratificación por la Asamblea General de Asociados.

Artículo 46.- Cada asociado al incorporarse a la cooperativa, deberá pagar por lo menos el valor de un certificado de aportación, conforme a lo establecido en el artículo 23, inciso b), de la presente Ley para los socios fundadores. El Estatuto normará la forma de pago del restante, su valor y los períodos de tiempo a pagarse.

Artículo 47.- Las cooperativas tendrán ejercicios anuales que se cerrarán de acuerdo al año fiscal. Al término de cada ejercicio se cortarán las cuentas y se elaborará el balance, el inventario y el estado de resultados.

Artículo 48.- Las cooperativas llevarán su contabilidad y para tal fin contarán con los libros respectivos, los que deberán ser autorizados por el Registro Nacional de Cooperativas.

Artículo 49.- A la fecha del cierre del ejercicio, el Consejo de Administración presentará un informe sobre la gestión realizada, que junto con el estado financiero y el informe de la Junta de Vigilancia, serán sometidos a la Asamblea General de Asociados para su aprobación. De dichos informes y estado financiero se remitirá una copia a la Autoridad de Aplicación.

Artículo 50.- El excedente del ejercicio será el sobrante del producto de las operaciones totales de la cooperativa, deducidos los gastos generales, las depreciaciones, las reservas y los intereses si los hubieren.

Artículo 51.- Si del ejercicio resultaren excedentes, estos se aplicarán para las siguientes reservas:

a) Diez por ciento (10%) mínimo, para creación o incremento de la reserva legal, la que cubrirá o amortizará las pérdidas que pudieran producirse en ejercicios económicos posteriores.

b) Diez por ciento (10%) mínimo, para la creación e incremento del fondo de educación, que se aplicará para el fomento de la formación cooperativista en el modo que establezca el Estatuto. Este fondo es inembargable.

c) Diez por ciento (10%), mínimo para el fondo de reinversión de la cooperativa.

d) Dos por ciento (2%), como aportación de las cooperativas a la Autoridad de Aplicación,

los que serán destinados, preferentemente, a los programas de-capacitación que ejecute.

La distribución del excedente líquido entre asociados se realizará en proporción a las operaciones que hubieren efectuado con la cooperativa. La capitalización del mismo, en su caso, se realizará en los términos prescritos en su Estatuto.

Artículo 52.- Si el balance arroja pérdidas, éstas serán absorbidas por el Fondo de Reserva Legal y, si éste fuera inferior, el saldo, será diferido y cubierto con los excedentes de los períodos subsiguientes.

Artículo 53.- Los recursos o cualquier tipo de bienes de la cooperativa, así como la denominación social deberán ser usados por los órganos autorizados de la misma y únicamente para cumplir sus fines.

Los infractores de esta norma quedarán solidariamente obligados a responder ante la cooperativa por los daños causados a la organización, sin perjuicio de las demás responsabilidades legales a que hubiere lugar.

Artículo 54.- La cooperativa podrá revalorizar sus activos fijos previa comunicación a la Autoridad Competente, de conformidad a lo establecido en el Estatuto. En caso de incremento, la totalidad de la suma resultante se acreditará al valor de los certificados de aportación suscritos por los asociados, a quienes se les emitirá un nuevo certificado por el valor del pago de la aportación inicial más el incremento de la revalorización.

En las cooperativas de ahorro y crédito, la revalorización de sus activos se hará a valor de mercado de los activos y previa autorización explícita de autoridad reguladora, contra el capital institucional. Si resultare un incremento, la totalidad de la suma resultante servirá para:

- a) Acrecentar y fortalecer sus reservas.
- b) Mantener una provisión para cubrir las pérdidas por préstamos incobrables.
- c) Integrar otros fondos que señale el Estatuto para fines específicos.

Artículo 55.- Los empleadores del sector público y privado, de acuerdo con el asociado, podrán, sin incurrir en costos de retención, efectuar las deducciones de los sueldos o salarios que sus empleados o trabajadores suscriban con la cooperativa, para aplicarse al pago de ahorro, aportaciones, préstamos, intereses o cualquier otra obligación que como asociados contraigan, hasta la completa cancelación de las mismas, todo si perjuicio de las disposiciones legales que regulen el salario mínimo. Las sumas deducidas serán entregadas a las respectivas cooperativas.

CAPÍTULO

V

DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Artículo 56.- La dirección y administración de la cooperativa tendrá la siguiente estructura:

- a) La Asamblea General de Asociados.

- b)El Consejo de Administración.
- c)La Junta de Vigilancia.
- d)La Comisión de Educación y Promoción del Cooperativismo.
- e) Cualquier otro tipo de órgano permanente que se establezca en los Estatutos.

De la Asamblea General de Asociados.

Artículo 57.- La Asamblea General de Asociados es la máxima autoridad de la cooperativa y sus acuerdos obligan a todos los asociados presentes o ausentes y a todos los órganos de dirección y control de la cooperativa, siempre que se hubieren tomado de conformidad con la presente Ley, su Reglamento y el Estatuto de la cooperativa.

Artículo 58.- Integran la Asamblea General, todos los socios activos, que son aquellos inscritos en el Libro de Asociados de la Cooperativa y debidamente inscritos en el Registro Nacional de Cooperativas que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo al Estatuto y su Reglamento.

Artículo 59.- Las sesiones de la Asamblea General de Asociados serán de dos tipos: Ordinarias y extraordinarias. Las primeras se reunirán como mínimo una vez al año dentro de los tres meses siguientes al corte de cada ejercicio económico.

Artículo 60.- Las asambleas extraordinarias se celebrarán a juicio del Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia, o por la solicitud al Consejo de Administración de al menos un veinte por ciento (20%) de sus asociados activos o por la Autoridad de Aplicación, cuando éstas sean necesarias o de urgencia. En estas Asambleas solo podrán tratarse los asuntos para los cuales hayan sido expresamente convocados. Los términos que cada instancia tiene para realizar la convocatoria será objeto de regulación en el Estatuto de la Cooperativa.

Artículo 61.- Cuando el Consejo de Administración no haga la convocatoria, para realizar Asamblea Ordinaria, durante los tres meses siguientes al corte del ejercicio económico, la Junta de Vigilancia deberá hacerla de oficio. Si la Junta de Vigilancia no lo hace dentro de los diez días siguientes al término señalado para la convocatoria por el Consejo de Administración, podrá solicitarlo el veinte por ciento (20%) como mínimo de los asociados activos, y en última instancia, la Autoridad de Aplicación podrá convocarla de oficio, si ésta lo estimará conveniente.

Artículo 62.- La Asamblea General de los Asociados sesionará válidamente con la presencia de la mitad más uno de los asociados activos o delegados convocados.

De no lograrse el quórum requerido en la primera convocatoria, la segunda se realizará conforme a lo estipulado en el Estatuto. Si pasada una hora el quórum no se hubiere completado, podrá sesionarse con un número no menor del cuarenta por ciento (40%) de los asociados activos o delegados presentes.

Artículo 63.- Para las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General de

Asociados, la convocatoria debe realizarse con la publicidad adecuada y en el plazo previsto en el Estatuto, incluyendo la agenda respectiva. Son nulos los acuerdos y actuaciones sobre temas ajenos a la orden del día, salvo cuando fueran consecuencias de asuntos incluidos en él, a tal efecto deberán contar con la aprobación de la mitad más uno del total de los asociados activos de la cooperativa.

De conformidad al artículo 22 de la presente Ley, le corresponde al Consejo de Administración, la aprobación del Reglamento de los Estatutos, y de no hacerlo en este plazo, la Junta de Vigilancia convocará a Asamblea General Ordinaria para que se aprueben.

Artículo 64.- En las sesiones de la Asamblea General de Asociados no se admitirá voto por poder, pero cuando el número de asociados fuera superior a cien o éstos residieran en localidades distantes o cuando su realización implicare gastos excesivos, en consideración a los recursos de la cooperativa, la Asamblea General de Asociados será integrada por los delegados electos conforme el procedimiento previsto en el Estatuto y su Reglamento.

Artículo 65.- Las decisiones en la Asamblea General de Asociados o de Delegados, según el caso, se adoptarán por simple mayoría de votos de los socios activos presentes, excepto en los casos siguientes:

a) Cuando se trate de decidir sobre disolución y liquidación de la cooperativa y/o la venta de los activos fijos que lleven a la disolución y liquidación de la cooperativa.

b) Cuando se trate de reforma al Estatuto.

c) Cuando se trate de aprobación, integración, incorporación, y fusión de una cooperativa con otra u otras.

d) Cuando se trate de formar parte de otra persona jurídica que no desnaturalice a la cooperativa.

e) Cuando se trate de la elección de los miembros del Consejo de Administración.

En los casos contemplados en los incisos anteriores, se requerirá un quórum mínimo del sesenta por ciento (60%) de los asociados activos de la cooperativa y para las decisiones, del voto favorable de por lo menos el setenta por ciento (70%) de los asociados activos o delegados presentes.

Artículo 66.- Es competencia exclusiva e indelegable de la Asamblea General de Asociados, sin perjuicio de otros asuntos que esta Ley o el Estatuto le reserven:

a) Aprobar y modificar el Estatuto y su Reglamento.

b) Aprobar las políticas generales de la Cooperativa y autorizar el presupuesto general.

c) Elegir y remover a los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y otros órganos permanentes.

d) Fijar las retribuciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de

Vigilancia cuando lo considere necesario.

- e) Tomar resoluciones sobre el informe de gestión y los estados contables, previo conocimiento de los informes de la Junta de Vigilancia y del contador en su caso.
- f) Decidir sobre la distribución de los excedentes en base a las propuestas presentadas por el Consejo de Administración.
- g) Resolver sobre la venta, traspasos de los activos y la emisión de obligaciones en que se comprometa el patrimonio de la cooperativa.
- h) Decidir sobre el incremento del capital social de la cooperativa.
- i) Decidir acción de responsabilidad contra los miembros del Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia.
- j) Decidir sobre la asociación de la Cooperativa con personas de otro carácter jurídico, público, o privado.
- k) Conocer y resolver las apelaciones de los asociados relacionados con las resoluciones de expulsión y sanciones a los asociados.
- l) Resolver sobre la integración, fusión, incorporación o disolución y liquidación de la cooperativa.
- m) Ratificar o vetar al gerente o gerentes, cuando el nombramiento realizado por el Consejo de Administración recaiga en una persona que no sea asociada de la cooperativa.
- n) Otras que el Estatuto y el Reglamento de la Cooperativa determine.

Artículo 67.- Los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia, podrán participar con voz pero no podrán votar en asuntos que los vinculen con situaciones anómalas que perjudiquen a los asociados y/o que estén en contra de la presente Ley, Reglamento, Estatutos y Reglamento Interno de la cooperativa.

Artículo 68.- En situaciones similares, los gerentes tendrán voz, y si fueren asociados estarán sometidos a las mismas limitaciones previstas en este artículo.

Del Consejo de Administración.

Artículo 69.- El Consejo de Administración tendrá a su cargo la dirección y administración de la Cooperativa. Estará integrado por un número impar de miembros, no menor de cinco (5), ni mayor de nueve (9), electos por la Asamblea General de Asociados por un período no mayor de tres años (3), ni menor de uno (1). Podrán ser reelectos, dependiendo de la voluntad de los asociados. Sus atribuciones y funciones se fijarán en el Estatuto.

Artículo 70.- El Consejo de Administración deberá reunirse por lo menos una vez cada mes y levantará acta de dicha reunión, suscrita por los miembros presentes. Formará quórum con la mitad más uno de sus miembros y tomará sus acuerdos por mayoría simple de los presentes. El Estatuto regulará su funcionamiento.

Para ser miembro del Consejo de Administración y de los demás órganos de dirección y control, hay que ser asociado activo de la cooperativa. Los demás requisitos serán establecidos por el Estatuto.

El Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia no podrán estar integrados por familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Se exceptúan aquellas cooperativas en las que más del sesenta por ciento (60%) de los asociados sean familiares dentro de los grados-antes-señalados.

Artículo 71.- La representación legal de la cooperativa corresponde al Consejo de Administración, quien delegará en el Presidente del mismo; en caso de ausencia temporal, en el Vice-Presidente; en ausencia de ambos, en el miembro que el Consejo de Administración designe.

El Consejo de Administración para la enajenación de todo tipo de bienes, deberá contar con la aprobación de la Asamblea General de Asociados, mediante oficios del notario público de su elección, excepto en aquellos casos que le sean propios de su actividad.

Artículo 72.- El gerente o gerentes de la empresa cooperativa podrán ser o no asociados. Una vez nombrado por el Consejo Administración y ratificados por la Asamblea General de Asociados en el caso de no ser asociados, serán responsables de la función ejecutiva de la empresa cooperativa y responderán ante el Consejo de Administración.

Artículo 73.- En las cooperativas que no sean familiares, el gerente no deberá tener parentesco de afinidad o consanguinidad con los miembros del Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Artículo 74.- Los gerentes responden ante la cooperativa y ante el Consejo de Administración y ante terceros en su carácter individual, por los daños y perjuicios que ocasionen por incumplimiento de sus obligaciones, negligencias, dolo, abuso, de confianza y/o por ejercicio de las actividades de su competencia. La actuación del gerente o gerentes y sus responsabilidades, es independiente de la conducción del Consejo de Administración y cada uno de ellos responderán por sus actos de manera individual.

Artículo 75.- El Consejo de Administración podrá designar comités de carácter temporal, cuyas funciones serán determinadas por éste.

Artículo 76.- Los miembros del Consejo de Administración y de los Comités que tengan funciones de gestión, son solidariamente responsables por sus respectivas decisiones. La responsabilidad solidaria alcanza a los miembros de las Juntas de Vigilancia por los actos que ésta no hubiera objetado oportunamente.

Quedan eximidos de responsabilidad los miembros de los órganos antes citados que salven expresamente su voto en el acto, siempre y cuando conste en acta, de tomarse la decisión respectiva o que de otra forma demuestren estar exentos de responsabilidad.

De la Junta de Vigilancia

Artículo 77.- La función de vigilancia de la cooperativa será desempeñada por la Junta de

Vigilancia, que responde únicamente ante la Asamblea General de Asociados. Las atribuciones de la Junta de Vigilancia deberán determinarse en el Estatuto de la cooperativa y son indelegables, por lo que no podrán ser derogadas sin previa reforma del Estatuto.

La Junta de Vigilancia tiene a su cargo la supervisión de las actividades económicas y sociales de la cooperativa, la fiscalización de los actos del Consejo de Administración y de los demás órganos y servidores de la cooperativa, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento, el Estatuto y el Reglamento Interno de la cooperativa y las resoluciones de la Asamblea General de Asociados. Ejercerá sus atribuciones, de modo que contribuya al cumplimiento de funciones y desarrollo de actividades de los demás órganos de la cooperativa. El funcionamiento de la Junta de Vigilancia estará regulado por el Estatuto.

Artículo 78.- Los miembros de la Junta de Vigilancia serán electos por la Asamblea General de Asociados en número impar no menores de tres (3), ni mayor de cinco (5), por períodos no menor de un (1) año ni mayor de tres (3) años, pudiendo sus miembros ser reelectos, lo que dependerá de la voluntad de los asociados.

Artículo 79.- Las responsabilidades, retribuciones y reglas de funcionamiento, establecidas para el Consejo de Administración, son aplicables a la Junta de Vigilancia.

Artículo 80.- En toda cooperativa deberá funcionar una Comisión de Educación y Promoción, electa de conformidad a lo establecido en el Estatuto, por un período no menor de un año (1), ni mayor de tres (3), pudiendo sus miembros ser reelectos de acuerdo a la voluntad de los asociados.

El coordinador de esta Comisión deberá ser un miembro del Consejo de Administración.

CAPÍTULO VI

DE LA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA COOPERATIVA

Artículo 81.- Bajo el espíritu de la presente Ley se considera como objetivo de la educación cooperativa, el desarrollo en los sujetos de la acción educativa, del hábito de ser, pensar, juzgar y actuar de acuerdo con los principios y el ideario cooperativo universal.

Artículo 82.- Se establece la obligatoriedad de crear la Comisión de Educación y Promoción del Cooperativismo en cada cooperativa, cuya función consistirá en planificar y ejecutar mediante el Fondo de Educación, políticas, planes de educación y promoción del movimiento cooperativo.

Esta Comisión deberá elaborar y presentar al Consejo de Administración, para su aprobación y ejecución, un plan anual de capacitación, con su presupuesto respectivo, de acuerdo a las necesidades e intereses de la cooperativa.

Artículo 83.- El Estado promoverá la enseñanza del cooperativismo en los centros de educación primaria y secundaria y la promoción de las cooperativas escolares. La Autoridad de Aplicación deberá crear dentro de su estructura una dependencia especial encargada de la promoción y educación cooperativa.

CAPÍTULO VII

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 84.- Son causas de disolución de la cooperativa las siguientes:

- a) Reducción del número de asociados por debajo del mínimo legal durante un período superior a un año.
- b) Fusión-o-incorporación.
- c) Por la pérdida total del capital y del fondo de reserva; o de una parte de éstos, que según disposición del Estatuto o del Reglamento, haga imposible la continuación de las operaciones sociales.
- d) Extinción total del patrimonio.
- e) Por incapacidad, imposibilidad o negativa de cumplir el objetivo socio económico para el cual fue creada.
- f) Por utilizar medios contrarios a la presente Ley y su Reglamento, al Estatuto y a los principios del cooperativismo, para cumplir los fines, objetivos o para el desarrollo de sus actividades.

Artículo 85.- Formas de disolución de la cooperativa:

- a) Por decisión de la Asamblea General con un quórum del setenta y cinco (75) por ciento del total de los asociados activos.
- b) Por decisión de la Autoridad de Aplicación basada en las causales establecidas en el Artículo 84 de la presente Ley.

Artículo 86.- En el caso previsto en el inciso b) del artículo 85, la Autoridad de Aplicación de la presente Ley otorgará a la cooperativa un plazo de seis meses para que subsane la causa o para que en el mismo término convoque a Asamblea General de Asociados con el fin de acordar la disolución. Si transcurrido dicho término la cooperativa no demuestra haber subsanado la causal o no se hubiere reunido en Asamblea General de Asociados, la Autoridad de Aplicación a solicitud de parte, procederá a emitir la resolución para la disolución y la efectiva liquidación de la cooperativa.

Antes de la terminación del plazo señalado, se podrá solicitar prórroga del mismo hasta por treinta (30) días, previo análisis y justificación de la solicitud.

Artículo 87.- En caso de disolución, la Asamblea General de Asociados de la cooperativa, nombrará una comisión liquidadora designando quien la presidirá. Deberán ser invitados a integrarla, un representante de la Autoridad de Aplicación y uno del organismo de integración al que perteneciere la cooperativa. Esta Comisión actuará como verdadera mandataria de la cooperativa en liquidación y será su representante legal.

Si en el término de treinta días la Comisión Liquidadora no fuera nombrada o no entrase

en funciones, la Autoridad de Aplicación procederá a nombrarla de oficio. El Reglamento determinará las funciones y competencias de la Comisión Liquidadora.

Artículo 88.- Antes de iniciar el proceso de disolución y liquidación, a través del Consejo de Administración, notificará a la Autoridad de Aplicación, detallando los motivos de las misma y la fecha en que se celebrará la asamblea extraordinaria de disolución y liquidación.

Artículo 89.- La función principal de la Comisión Liquidadora será realizar el activo y cancelar el pasivo, actuando con la denominación social de la cooperativa, la que siempre deberá ser seguida de la expresión "en liquidación" y sus representantes se denominarán "Comisión Liquidadora" o "Liquidadores".

La Comisión Liquidadora deberá presentar el acta de disolución ante el Registro Nacional de Cooperativas para su debida inscripción.

Artículo 90.- Son funciones de la Comisión Liquidadora, entre otras:

- a) Levantar inventario de los activos patrimoniales y de los pasivos de cualquier naturaleza que sean, de los libros correspondientes, de los documentos y papeles de la cooperativa.
- b) Concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución.
- c) Exigir cuentas de su administración a las personas que hayan manejado intereses de la cooperativa.
- d) Vender las mercaderías, muebles e inmuebles de la cooperativa.
- e) Cobrar judicial y extrajudicialmente los créditos activos, recibir su importe y otorgar los finiquitos respectivos, por parte de la Autoridad de Aplicación.
- f) Liquidar y cancelar las cuentas de la cooperativa con terceros, en primer lugar y **con** cada uno de los asociados, si hubiere excedentes.
- g) Presentar estados de liquidación ante los asociados y a la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
- h) Rendir al fin de la liquidación, cuenta general de su gestión y obtener el finiquito.

Artículo 91.- Concluida la liquidación, después de haber realizado el activo y cancelado el pasivo, el remanente, sí lo hubiere, se destinará en el siguiente orden:

- a) Satisfacer los gastos de liquidación.
- b) Satisfacer a los cooperados los intereses de las aportaciones, si los hubiere, y los excedentes pendientes o efectuar abonos que pudieran cubrirse.
- c) Devolver a los cooperados el monto que representa el valor de los certificados de aportación, o la parte proporcional de los mismos que corresponda en caso que el haber social fuera insuficiente.

d) El remanente, si lo hubiese, será transferido al órgano de integración, o en su defecto, al Consejo Nacional Cooperativo, quienes deberán destinarlo a la capacitación, promoción y fomento cooperativo.

TÍTULO-II

DE-LA-INTEGRACIÓN-COOPERATIVA

CAPÍTULO-ÚNICO

DE LA INTEGRACIÓN

Artículo 92.- Las cooperativas podrán asociarse entre sí en la forma que lo determine la Asamblea General para intercambiar servicios, celebrar contratos de participación, complementar actividades, cumplir en forma más adecuada sus objetivos y en fin, para llevar a la práctica el principio de integración cooperativa.

Artículo 93.- Dos o más cooperativas podrán fusionarse, disolviéndose sin liquidarse, extinguiéndose su personalidad jurídica. La nueva cooperativa se constituirá haciéndose cargo del activo y el pasivo de las disueltas.

Artículo 94.- Una o varias cooperativas podrán incorporarse a otra, conservando la incorporante su personalidad jurídica y extinguiéndose la de las incorporadas. El activo y el pasivo de éstas se transfiere a la incorporante.

Artículo 95.- Por resolución de sus respectivas Asambleas General de Asociados, las cooperativas podrán constituir cooperativas de grado superior o afiliarse entre ellas. Estas se regirán por las disposiciones de la presente Ley con las adecuaciones que resulten de su naturaleza.

Artículo 96.- Cinco o más cooperativas del mismo tipo, podrán organizarse en centrales de cooperativas, con el objeto primordial de lograr el mayor fortalecimiento socio económico de las entidades que la integran. Tres o más centrales de un mismo tipo podrán constituir una Federación.

La Central se constituirá sin hacerse cargo del activo y el pasivo de las cooperativas que la conforman.

Artículo 97.- Cinco o más cooperativas en un mismo Departamento o región podrán unirse, sin disolverse ni liquidarse, conservando su personalidad jurídica y formando una unión.

La unión se constituirá sin hacerse cargo del activo y el pasivo de las cooperativas integradas.

Artículo 98.- Tres o más uniones y/o centrales de cooperativas podrán constituirse en una federación.

Artículo 99.- Tres o más federaciones de cooperativas podrán constituir Confederaciones o asociarse a ella.

Artículo 100.- Las cooperativas de grado superior podrán realizar, conforme las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento y de su respectivo Estatuto, actividades de carácter técnico, económico, social, cultural y otras pertinentes.

Artículo 101.- Las asociaciones de cooperativas en sus diversas formas de integración, incorporación, fusión, centrales, uniones, federaciones y confederaciones, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Cooperativas.

Artículo 102.- Para todos los efectos legales, los organismos de integración cooperativa a que se refieren los artículos anteriores, serán considerados como cooperativas y por lo tanto, son aplicables a ellos, en lo pertinente, las disposiciones de constitución, inscripción, administración y funcionamiento, así como los beneficios y exenciones a que se refiere la presente Ley y lo que en particular establezca el Reglamento de la misma.

Artículo 103.- Los organismos de integración cooperativa tienen los siguientes objetivos:

- a) Representar y defender los intereses de las cooperativas asociadas y coordinar, orientar y supervisar sus actividades.
- b) Proporcionar a sus asociados asistencia técnica y asesoría general o especial.
- c) Crear, organizar o contratar servicios para el aprovechamiento en común de bienes o con el propósito de lograr el mejor cumplimiento de sus fines y de las cooperativas asociadas, tales como: Suministros, comercialización o mercadeo, industrialización de productos, financiamiento, seguros, auditorías, fondos de estabilización y cualesquiera otros similares o relacionados.
- d) Fomentar, coordinar y desarrollar programas educativos de capacitación y promoción social y llevar a efecto campañas de divulgación y educación cooperativa y promover la integración de la mujer al movimiento cooperativo.
- e) Realizar actividades y organizar servicios técnicos sociales o económicos en forma subsidiaria para las entidades asociadas.
- f) Colaborar con la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, en actividades de interés del movimiento cooperativo.

Artículo 104.- Las cooperativas y los organismos de integración cooperativo podrán asociarse a cualquier organismo de integración internacional.

Artículo 105.- Los organismos de integración cooperativa no pueden transformarse en entidades de otra naturaleza jurídica. Es nula toda decisión en contrario y compromete la responsabilidad personal de quienes la adopten.

Artículo 106.- En el Estatuto de los organismos de integración cooperativa, deben establecerse las normas y procedimientos para su funcionamiento, de la misma forma que se establecen para las cooperativas de primer grado.

Artículo 107.- La representación legal de los organismos de integración cooperativa

corresponde al Consejo de Administración, el cual podrá delegar en uno de sus miembros conforme lo establezca el Estatuto.

TÍTULO-III

DE LAS RELACIONES DEL ESTADO CON LAS COOPERATIVAS

CAPÍTULO-I

DE LAS OBLIGACIONES, BENEFICIOS Y EXENCIONES

Artículo 108.- Las cooperativas están obligadas a:

- a) Llevar libros de actas, de contabilidad, de inscripción de certificados de aportaciones y registro de asociados debidamente sellados por el Registro Nacional de Cooperativas que para estos efectos llevará la Autoridad de Aplicación.
- b) Enviar al Registro Nacional de Cooperativas dentro de los treinta (30) días siguientes a su elección o nombramiento, los nombres de las personas designadas para cargos en el Consejo de Administración, Junta de Vigilancia-y-Comisiones.
- c) Suministrar a la Autoridad de Aplicación, una nómina completa de los asociados de la cooperativa especificando los activos y los inactivos, al menos noventa días previos a la realización de la Asamblea General de Asociados y del cierre del ejercicio económico, y periódicamente, los retiros e ingresos de asociados que se produzcan.
- d) Proporcionar a la Autoridad de Aplicación dentro de los treinta días posteriores a la terminación del respectivo ejercicio económico, un informe que contenga los estados financieros de la cooperativa.
- e) Proporcionar todos los demás datos e informes que les solicite la Autoridad de Aplicación dentro del término prudencial que ésta le señale.

Artículo 109.- Con el objeto de estimular el movimiento cooperativista, se otorga a favor de las cooperativas, de conformidad con la ley de la materia y otras disposiciones pertinentes, los siguientes beneficios y exenciones:

- a) Exención de impuesto de timbre y papel sellado.
- b) Exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
- c) Publicación gratuita de todos los documentos en La Gaceta, Diario Oficial.
- d) Exención de Impuesto sobre la Renta (IR).
- e) Exención de Impuesto al Valor Agregado, para la importación de los insumos, materias primas, bienes intermedios y de capital utilizados en la producción de los bienes de exportación y de consumo interno.
- f) Exención del DAI, ISC, IVA e impuestos municipales en las importaciones de bienes de capital, llantas, materia prima, maquinarias, insumos y repuestos utilizados, a favor de las

cooperativas.

g) Otros beneficios y exenciones que las demás leyes y disposiciones establezcan a favor de las cooperativas.

Artículo 110.- En ningún caso, las cooperativas gozarán de un régimen de protección o privilegios menor del que gocen empresas, sociedades o asociaciones con fines u objetivos similares desde el punto de vista social o económico.

Artículo 111.- El procedimiento para la obtención de las exenciones y beneficios estarán a lo dispuesto en la ley de la materia.

Artículo 112.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley, tendrá la facultad de revisar y comprobar aquellos casos en los que una cooperativa esté haciendo uso indebido de los beneficios y exenciones referidos en el artículo 109 de la presente Ley y una vez comprobado, lo hará saber a la Dirección General de Ingresos, dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que los revoque, suspenda o restrinja en cualquier momento.

CAPÍTULO II

DEL INSTITUTO NICARAGÜENSE DE FOMENTO COOPERATIVO

Artículo 113.- Créase el Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo, cuya denominación podrá abreviarse como INFOCOOP y para los efectos de la presente Ley y su Reglamento se entenderá como la Autoridad de Aplicación.

El INFOCOOP se constituye con personalidad jurídica propia, con autonomía administrativa y funcional, cuya función principal es la de ser el organismo rector de la política nacional de protección, fomento y desarrollo cooperativo. Además de la regulación, suspensión, supervisión y control de las cooperativas. Tendrá como objetivo principal fomentar, promover, divulgar y apoyar el movimiento cooperativo a todos los niveles.

Tendrá su domicilio legal en la ciudad de Managua, pudiendo establecer delegaciones u oficinas en los departamentos del país.

Artículo 114.- Son atribuciones y funciones del INFOCOOP, sin perjuicio de las demás que le otorgue la presente Ley y su Reglamento:

- a) Promover, planificar y ejecutar las políticas nacionales en materia cooperativa, para fomento, capacitación y promoción del cooperativismo.
- b) Autorizar y certificar la constitución y funcionamiento de las cooperativas conforme con los requisitos legales e inscribirlas en el Registro Nacional de Cooperativas.
- c) Certificar cambios y actualizaciones que soliciten las cooperativas en el marco de esta Ley y su Reglamento.
- d) Velar porque las cooperativas cumplan con las disposiciones legales y los principios cooperativos en función de su correcta administración, pudiendo realizar inspecciones o

auditoría cuando lo estime conveniente.

e) Atender gestiones y demandas de las cooperativas y/o de sus asociados.

f) Requerir documentación para realizar investigaciones en las cooperativas, a solicitud de parte o de oficio.

g) Asistir a las sesiones de Asamblea General de las cooperativas, a solicitud de parte o de oficio.

h) Actualizar la estadística de Registro y crear un Centro Nacional de Documentación Cooperativa.

i) Coordinar su labor con otros organismos nacionales e internacionales, por razón de las actividades cooperativas.

j) Aprobar, revocar o suspender las resoluciones de los órganos sociales de la cooperativa, cuando éstas fueran contrarias a la presente Ley, a su Reglamento, al Estatuto y a su Reglamento Interno.

k) Cancelar las personalidades jurídicas, de oficio a solicitud de parte que lo justifique, así como disolver y liquidar la cooperativa cuando se compruebe que cometió o comete infracciones o violaciones flagrantes a esta Ley y su Reglamento.

l) Asistir y auxiliar oportunamente a los asociados, cuando se considere que se está lesionando los intereses de la cooperativa y/o se ponga en grave peligro la propia existencia de la misma.

m) Investigar, sistematizar y divulgar información de experiencias que fortalezca el derecho y la jurisprudencia cooperativa en Nicaragua.

n) Facilitar y promover el acceso de las cooperativas a recursos financieros para capital de trabajo, inversión, diversificación y mercado de bienes y servicios.

o) Impulsar mecanismos de inteligencia de mercado en apoyo al movimiento cooperativo.

p) Fomentar y apoyar la participación de las cooperativas en la cogestión con empresas públicas y/o en forma directa para ofertar servicios básicos a la población que lo demande.

q) Convocar a Asamblea General, de conformidad al artículo 61 de la presente Ley.

r) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia cooperativa.

s) Autorizar a instituciones, organismos y organizaciones para que presten, el servicio de capacitación en el sector cooperativo.

t) Garantizar el fomento a las cooperativas.

u) Asociarse a otros organismos de integración internacional e incluso institutos de otros

países.

Las funciones de fiscalización, las acciones de orden técnico y la capacitación podrá ejercerlas mediante convenios con las organizaciones cooperativas de integración.

Artículo 115.- En caso de infracción de la presente Ley y su Reglamento y las demás disposiciones vigentes en la materia, el INFOCOOP podrá aplicar a las cooperativas o a los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comisiones Permanentes y Gerentes que resultaren responsables, las medidas establecidas en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 116.- Contra la resolución del INFOCOOP relacionada con la inscripción de cooperativas, reformas estatutarias, reglamentos e imposición de sanciones y liquidaciones, se deberá agotar el procedimiento administrativo que señala la Ley 290, "Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo" y su Reglamento, el afectado podrá reservarse el derecho de utilizar la vía judicial dentro del término establecido por la ley de la materia.

Artículo 117.- El Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo tendrá cinco (5) fuentes de financiamiento:

- a) En el presupuesto General de la República, se asignará una partida presupuestaria para el funcionamiento, fortalecimiento institucional, promoción y fomento cooperativo del INFOCOOP.
- b) Un porcentaje equivalente al 2% de los excedentes netos de las cooperativas para aportar al INFOCOOP, en su funcionamiento de control, supervisión, gestión y administración.
- c) Los ingresos provenientes de la emisión de documentos que se soliciten y los que se causen por multas a las cooperativas.
- d) La gestión de recursos económicos, a través de planes y proyectos, dentro y fuera del país con organismos nacionales e internacionales y multilaterales que le permitan captar recursos.
- e) Recursos provenientes de donaciones o préstamos concesionales gestionados por el INFOCOOP, tanto a nivel nacional como internacional.

Artículo 118.- El INFOCOOP estará regido por una Junta Directiva integrada por nueve miembros compuesta de cuatro representantes del Poder Ejecutivo y cinco representantes del movimiento cooperativo.

Los representantes del Poder Ejecutivo deberán ser los Ministros de las carteras siguientes: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y Ministerio Agropecuario Forestal. Los Ministros podrán delegar su representación e integración a la Junta Directiva en la persona de su Vice Ministro correspondiente.

Los representantes de las cooperativas deberán provenir de diferentes sectores y designados por el Consejo Nacional de Cooperativas, debiendo garantizar la

representación de ambos géneros y diversidad de los sectores cooperativos. Los representantes de las cooperativas podrán delegar en un suplente.

Artículo 119.- Para ser miembro de la Junta Directiva del Instituto, con excepción de los Ministros es necesario:

- a) Ser nicaragüense, con pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
- b) Ser mayor de edad y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
- c) Tener reconocida experiencia en materia de cooperativas y la suficiente capacidad para cumplir satisfactoriamente sus funciones, es decir haber participado activamente en la administración de alguna cooperativa.
- d) No haber sido declarado en estado de quiebra o insolvencia.
- e) No tener vínculos de parentesco con otros miembros de la Junta Directiva hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
- f) Ser miembro activo y estar en pleno goce de sus derechos en una cooperativa.

Artículo 120.- Es competencia de la Junta Directiva trazar la política del Instituto, velar por la realización de sus fines y de un modo específico:

- a) Nombrar y remover al director ejecutivo, al subdirector y al auditor, en su caso.
- b) Aprobar el presupuesto anual ordinario y los extraordinarios, los balances anuales.
- c) Dictar los reglamentos de organización y funcionamiento del Instituto.
- d) Aprobar la escala de salarios para los empleados y funcionarios del Instituto.
- e) Resolver las solicitudes de crédito que se presenten al Instituto, conforme a las normas del reglamento específico que sobre esta materia deberá dictarse.
- f) Contratar empréstitos nacionales e internacionales, para el cumplimiento de sus fines, lo mismo que suscribir convenios con organismos internacionales, en materia de cooperativismo y gestionar recursos para el desarrollo y promoción de los diferentes sectores del movimiento cooperativo.
- g) Autorizar la venta o gravamen de los bienes del Instituto, lo mismo que la inversión de los fondos disponibles y aceptar transacciones y compromisos arbitrales.
- h) Conocer y resolver los recursos de apelación contra los actos del director y subdirector ejecutivos y del auditor, conforme el trámite indicado en los reglamentos.
- i) Autorizar la apertura y operación de delegaciones departamentales subsidiarias del Instituto, cuando las circunstancias del país así lo ameriten; y,
- j) Ejercer las demás funciones que le corresponden de conformidad con la presente Ley y sus reglamentos.

Artículo 121.- Los miembros de la Junta Directiva del Instituto durarán en sus cargos tres años, pudiendo ser reelectos, y tendrá la representación legal de la misma quien podrá delegar en su Presidente en todo o en parte sus facultades, y en su defecto, en su Vicepresidente.

Artículo 122.- Los miembros de la Junta Directiva elegirán de entre sus miembros a:

- a)Un Presidente designado.
- b)Un Vicepresidente.
- c)Un Secretario.
- d)Un Vicesecretario.
- e)Un Tesorero.
- f)Dos Vocales.
- g)Dos Fiscales.

Artículo 123.- La administración general del Instituto estará a cargo de un Director Ejecutivo, nombrado por la Junta Directiva, previa propuesta individual de sus miembros.

El nombramiento del Director Ejecutivo deberá recaer en persona de reconocida probidad y capacidad y probada experiencia en asuntos cooperativos.

En ningún caso podrá nombrarse Director Ejecutivo a quien fuera miembro de la Junta Directiva o lo hubiere sido en el año anterior al nombramiento, o a personas que fueran cónyuges o parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, de cualquiera de los de la Junta Directiva y deberá cumplir con los mismos requisitos establecidos en el artículo 119 de la presente Ley para ser miembro de la Junta Directiva del INFOCOOP.

Artículo 124.- El INFOCOOP, dentro de su estructura orgánica y para el cumplimiento de sus funciones, deberá contar con al menos las siguientes Direcciones:

- a)Dirección de Fiscalización y Control.
- b)Dirección de Asistencia Técnica, Educación y Capacitación.
- c)Dirección de Coordinación Departamental.
- d)Registro Nacional de Cooperativas.
- e)Auditor-Externo.

Artículo 125.- El INFOCOOP estará asistido de una Dirección de Asesoría Jurídica que atenderá todos los aspectos relacionados con la asistencia legal de todas sus instancias.

CAPÍTULO III

DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS

Artículo 126.- Créase el Consejo Nacional de Cooperativas, cuya denominación podrá abreviarse CONACOOOP, tendrá personalidad jurídica propia y se constituye como órgano de participación amplia, de información, de consulta, de asesoramiento, elaboración y presentación de propuestas de políticas y programas de fomento, promoción, educación, inversión y desarrollo de la organización de cooperativas que fortalezcan este movimiento.

El CONACOOOP designará y promoverá a los representantes del movimiento cooperativo ante la Junta Directiva del INFOCOOP.

Artículo 127.- El CONACOOOP elaborará su reglamento de funcionamiento en un período de 60 días a partir de su integración, sino lo hiciere, el INFOCOOP podrá proceder a la elaboración de este a solicitud de por lo menos cinco uniones, centrales, federaciones y/o confederaciones de cooperativas, el que podrá ser ratificado o reformado en la siguiente sesión del CONACOOOP con el voto favorable de los dos tercios de los miembros que lo integren.

Artículo 128.- El CONACOOOP tendrá las atribuciones y funciones siguientes:

- a) Aprobar su propio reglamento de funcionamiento.
- b) Designar y remover en su caso a los representantes de los diferentes sectores cooperativos en la Junta Directiva del INFOCOOP.
- c) Participar y asesorar en la elaboración y presentación de propuestas de políticas y programas para fomento, promoción, educación y desarrollo del movimiento cooperativo.
- d) Informar y consultar al movimiento cooperativo sobre las propuestas de políticas y programas para fomento, promoción, educación y desarrollo del movimiento cooperativo.
- e) Sesionar ordinariamente, en Asambleas Ordinarias, una vez cada tres meses y en Asambleas Extraordinarias cuando sea convocada por el Presidente o por al menos la mitad de los delegados.
- f) Convocar y presidir las asambleas a que se refiere el artículo del inciso anterior.
- g) Servir de organismo consultor en estudios e investigaciones promovidas por el INFOCOOP sobre el movimiento cooperativo y las políticas nacionales.
- h) Propiciar el acercamiento y las mejores relaciones entre los diferentes sectores cooperativos y los organismos de integración cooperativa.
- i) Promover el desarrollo del movimiento cooperativo; y
- j) Estudiar los problemas que dificultan el adelanto del cooperativismo y programar sus soluciones.

Artículo 129.- El Consejo dispondrá de una Secretaría General, que funcionará como órgano de apoyo técnico y administrativo y cuya función recaerá en la Dirección General de Cooperativas. Esta Secretaría ejercerá, de igual modo, las funciones de coordinación y comunicación permanente entre los órganos de administración del Estado.

TÍTULO V

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 130.- Se faculta por única vez, para que en un plazo no mayor de 60 días, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, la Dirección General de Cooperativas (DIGECOOP) del Ministerio del Trabajo, convoque al movimiento cooperativo para la conformación de un Consejo Nacional provisional, actuando la DIGECOOP como facilitador del movimiento cooperativo.

Esta convocatoria será a las cooperativas con personería jurídica estén estas o no, en estructura de niveles superiores. Las Cooperativas que estén en estructura de niveles superiores podrán ejercer su derecho a estar representadas a través de sus estructuras superiores. Las cooperativas de base tendrán una representación de cinco miembros como máximo y las de Federaciones, Uniones, Centrales y Confederaciones, tendrán tres representantes.

La DIGECOOP hará la convocatoria previa coordinación con el movimiento cooperativo y deberá garantizar un equilibrio, tanto de las áreas territoriales como de los diferentes tipos de cooperativas organizadas a nivel nacional.

Este Consejo Nacional designará de manera provisional a los delegados del movimiento cooperativo ante el INFOCOOP, pudiendo ser ratificados o sustituidos una vez que el Consejo Nacional Cooperativo esté funcionando de-manera-permanente.

Artículo 131.- Con el objeto de que se ponga en funcionamiento al INFOCOOP dentro del término de ciento ochenta días, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se autoriza al Poder Ejecutivo para que, a través de los representantes del Estado de conformidad con la presente Ley, promueva e integre la primera Junta Directiva, a fin de que ésta elabore los planes de organización administrativa, presupuestos y todo lo que sea indispensable a la realización de los objetivos de esta Ley.

Artículo 132.- La Dirección General de Cooperativas (DIGECOOP), del Ministerio del Trabajo, proporcionará a los miembros de la primera Junta Directiva todo lo necesario para que realice sin tropiezos sus funciones.

Artículo 133.- Todos los recursos económicos que hasta hoy pertenecen a la DIGECOOP, formarán parte del patrimonio del Instituto, siendo este su sucesor en todos los aspectos.

Artículo 134.- La Junta Directiva elaborará un proyecto de Reglamento Interno del INFOCOOP, dentro de los noventa días siguientes a su instalación y mientras el INFOCOOP no esté instalado. La Dirección General de Cooperativas (DIGECOOP), del Ministerio del Trabajo será la que resuelva, de manera transitoria todo lo concerniente a las facultades, funciones y atribuciones que la presente Ley y su Reglamento le otorgue al INFOCOOP.

Artículo 135.- Se consideran precooperativas, aquellos grupos que bajo la orientación de una entidad promotora autorizada del sector se encuentran en proceso de legalización y que organizados para funcionar como cooperativa, carecen de capacidad económica, organizativa, administrativa o técnica o su inmediata posibilidad de cumplir su proceso de legalización. Para tal fin dispondrá de un plazo máximo de un año.

Artículo 136.- La entidad promotora de una precooperativa deberá prestarle a ésta los servicios necesarios que proporcione su desarrollo y evolución hacia-cooperativa.

Artículo 137.- Durante el período a que se refiere el artículo 134 de la presente Ley, la Autoridad de Aplicación, previa presentación de la solicitud para obtener la personalidad jurídica y con expresión de su situación de precooperativa, otorgará una constancia a la misma acreditándola como tal para su funcionamiento legal.

Artículo 138.- Tanto las disposiciones contempladas en la presente Ley General de Cooperativas, como las contenidas en su Reglamento correspondiente, serán aplicables a las cooperativas de ahorro y crédito, mientras no exista un marco legal que las regule como sector especializado de la economía nacional.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 139.- Las tierras y demás medios de producción o infraestructura que sean o hubieren sido otorgadas o donadas por el Gobierno a las cooperativas, se considerarán aportados por los asociados en partes iguales como parte del patrimonio original de las mismas, por lo cual deberá incluirse el valor de éstos mismos en su respectivas aportaciones al capital.

Artículo 140.- Al momento de perder un miembro su calidad de asociado, por cualquiera de las causas que establezca la presente Ley y su Reglamento, las aportaciones a la que se refiere el artículo anterior, no podrán ser liquidadas en especies, sino que en el respectivo valor de mercado que le correspondiese.

La autorización de venta de las tierras y otros activos deberá contar como mínimo con la autorización de las terceras partes del total de asociados.

Artículo 141.- La Asamblea General de Asociados, en caso de ser acordada la venta o transacción, designará al representante legal que llevará a efecto. Este podrá ser el Presidente del Consejo de Administración o en su defecto cualquiera otro que designe la Asamblea.

Artículo 142.- La cooperativa deberá presentar a la Autoridad de Aplicación, certificación del acta de la Asamblea General de Asociados, con un ejemplar del estudio financiero y económico, para la autorización de la venta o transacción. Obtenida éstas, se procederá a la realización del acto notarial.

Los Registradores de la Propiedad Inmueble deberán exigir esta autorización para la inscripción del respectivo instrumento.

Artículo 143.- Los casos no previstos expresamente en la presente Ley, en los Estatutos y Reglamentos de las cooperativas, se resolverán de acuerdo a los principios cooperativos, jurisprudencia, doctrina y práctica universalmente reconocida que sustente el derecho cooperativo y finalmente por los preceptos del derecho común que le sean aplicables.

Artículo 144.- Todos los organismos del sector público y privado que se relación con el movimiento cooperativista, quedan obligados a proporcionar al Instituto la información que éste le solicitare para la eficaz realización de sus-objetivos.

Artículo 145.- A partir de la fecha que entre en vigencia la presente Ley, se llevará un Registro Nacional de Cooperativas único, el que estará bajo la responsabilidad del Instituto.

Artículo 146.- Las cooperativas existentes al momento de entrar en vigencia la presente Ley, para conservar su validez y los derechos adquiridos deberán adecuar su situación a lo que establece esta Ley y su Reglamento en un plazo no mayor a un año.

Artículo 147.- Una vez entrada en vigencia la presente Ley, el Presidente de la República dispondrá de un plazo de sesenta (60) días para su respectiva reglamentación.

Artículo 148.- La presente Ley deroga la Ley General de Cooperativa del veintitrés de Junio de mil novecientos setenta y uno, publicada en La Gaceta No. 164 del veintitrés de Julio de mil novecientos setenta y uno; su Reglamento, la Ley de Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales del veinticuatro de Marzo de mil novecientos noventa; la Resolución del Ministerio del trabajo No. II del once de Mayo de mil novecientos noventa y tres; el artículo 27, inciso d) de la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, Ley 290 y Artículos 246, 247, 248 y 249 del Reglamento de la Ley 290 y cualquier otra disposición que se oponga a esta Ley.

Artículo 149.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Dada en la Ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil cuatro. CARLOS NOGUERA PASTORA, Presidente de la Asamblea Nacional. MIGUEL LÓPEZ BALDIZÓN, Secretario de la Asamblea Nacional.

Ratificada constitucionalmente de conformidad al artículo 143, parte infine de la Constitución Política de la República, en la Tercera Sesión Ordinaria de la XX Legislatura de la Asamblea Nacional, celebrada el día nueve de diciembre del año dos mil cuatro, en razón de haber sido rechazado el veto parcial del Presidente de la República de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil cuatro. Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil cuatro. Por tanto: Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. CARLOS NOGUERA PASTORA, Presidente de la Asamblea Nacional. MIGUEL LÓPEZ BALDIZÓN, Secretario de la Asamblea Nacional.

4.26. PANAMA

Régimen Especial de las Cooperativas **(Ley No.17 del 1ero de Mayo de 1977)**

TÍTULO I **COOPERATIVAS**

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Se establece el régimen especial para regular e integrar las Cooperativas como parte fundamental de la economía nacional, con los siguientes fines permanentes e irrenunciables:

1. Acrecentar la riqueza nacional y asegurar sus beneficios para el mayor número de los habitantes del país.
2. Facilitar la aplicación y práctica de la doctrina y los principios del Cooperativismo.
3. Promover el desarrollo del derecho cooperativo como rama especial del ordenamiento jurídico general.
4. Contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y la economía participativa.
5. Coadyuvar en el ejercicio y perfeccionamiento de la democracia. mediante una activa participación.
6. Propiciar el apoyo del gobierno nacional y municipal al sector cooperativo.
7. Participar en el diseño y ejecución de los planes y programas nacionales de desarrollo socioeconómico.
8. Contribuir al fortalecimiento y consolidación de la integración cooperativa en sus diferentes manifestaciones.

Artículo 2. Las Cooperativas constituyen asociaciones de utilidad pública, de interés social y de derecho privado; y el ejercicio del cooperativismo se considera un sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico. Al fortalecimiento de la democracia a la equitativa distribución de la riqueza y del ingreso a la racionalización de las actividades económicas ya facilitar, tarifas, tasas costos y precios en favor de la comunidad en general. El Estado fomentará las cooperativas. Mediante la adecuada asistencia técnica y financiera, y las fiscalizará. Para asegurar el libre desenvolvimiento y desarrollo de las cooperativas. El Estado les garantiza autonomía jurídica y funcionamiento democrático.

Artículo 3. Derecho cooperativo es el conjunto de normas especiales, jurisprudencias doctrinas y prácticas basadas en los principios que determinan y condicionan la actuación de los organismos cooperativos y los sujetos que en ellos participan. Son actos cooperativos los realizados entre cooperativas y sus asociados o entre éstos y las entidades previstas en esta Ley o entre los asociados y terceros en cumplimiento de su objetivo social, y quedan sometidos al derecho cooperativo.

Artículo 4. La organización, funcionamiento y regulación de las cooperativas y demás entidades previstas en esta Ley se regirán estrictamente por las disposiciones de ésta, del reglamento general o reglamentos especiales que se dicten. así como por los estatutos y reglamentos internos de las cooperativas y en general por el derecho cooperativo y la doctrina.

Artículo 5. Las Cooperativas están obligadas a realizar programas de modo permanente. que tiendan a la formación de sus asociados y trabajadores y de la juventud. En los principios, métodos y características del cooperativismo. Así como a la capacitación de los administrativos y la gestión empresarial propia.

Las actividades de asistencia técnica, investigación y promoción del cooperativismo, forman parte de la educación cooperativa que establece la presente Ley.

Artículo 6. Las cooperativas son asociaciones privadas constituidas por personas naturales y jurídicas las cuales constituyen empresas que sin perseguir fines de lucro, tienen por objetivo planificar y realizar actividades de trabajo o de servicios de beneficio socioeconómico, encaminadas a la producción, distribución y consumo cooperativo de bienes y servicios, con la aportación económica, intelectual y moral de sus asociados. Para los fines de la presente Ley, tales cooperativas se denominan, en adelante, organizaciones cooperativas de primer grado.

Artículo 7. Las cooperativas deben cumplir los siguientes principios:

1. Membresía abierta y voluntaria.
2. Control democrático de los miembros.
3. Participación económica de los miembros.
4. Autonomía e independencia.
5. Educación, entrenamiento e información.
6. Colaboración entre la cooperativas.
7. Compromiso con la comunidad.

Artículo 8. Las cooperativas deben poseer las características siguientes:

1. Ilimitación y variabilidad del número de asociados.
2. Duración indefinida.
3. Variabilidad e ilimitación del capital.
4. Independencia religiosa, racial y política-partidaria.
5. Igualdad de derechos y obligaciones entre los asociados.
6. Reconocimiento de un solo voto a cada asociado, independientemente de sus aportaciones.
7. Irrepartibilidad de las reservas sociales.

Artículo 9. Queda prohibido a las cooperativas:

1. Conceder ventajas o privilegios a sus iniciadores, fundadores, directores o administradores, o preferencias a parte alguna del capital social.
2. Imponer condiciones rigurosas o excluyentes para el ingreso de nuevos asociados, que impidan su crecimiento.
3. Establecer acuerdos o combinaciones con sociedades mercantiles lucrativas que permitan a éstas beneficiarse, directa o indirectamente de las prerrogativas o beneficios que esta Ley otorga a las cooperativas.
4. Desarrollar actividades distintas de las enumeradas en sus estatutos y de las legalmente autorizadas.
5. Integrar sus organismos directivos permanentes con personas que no sean sus asociados.
6. Transformar en actividades de otra naturaleza jurídica.

Es una la decisión que contravenga cualquier prohibición aquí establecida, y compromete la responsabilidad personal de quienes la adopten.

Artículo 10. Las cooperativas deben incluir, en su denominación social, el vocablo cooperativa, adicionándole las palabras o la abreviatura que corresponda a su responsabilidad, limitada (R.L.) o suplementada (R.S.). Se entiende por responsabilidad limitada aquella en la que los asociados responden únicamente con el monto de las aportaciones que hayan pagado o suscrito; en el segundo caso, los asociados rinden una garantía adicional fijándose, al efecto, un máximo que debe ser estipulado en el estatuto. Deben indicar, así mismo, la naturaleza de su actividad principal. Queda prohibido el uso de la denominación cooperativa. Así como las abreviaturas coo y coop a entidades no

constituidas conforme a la presente ley. La responsabilidad de la cooperativa con terceros se limita al monto del patrimonio social.

Artículo 11. Por razón de su finalidad, las cooperativas pueden ser especializadas o de servicios múltiples o integrales. Son cooperativas especializadas, las que se ocupan de una sola actividad económica, social o cultural, como la producción, el consumo, la salud o la vivienda. Son cooperativas de servicios múltiples o integrales, las que se ocupan de diversos ramos de la actividad económica, social o cultural, y tienen por finalidad satisfacer necesidades conexas o complementarias.

Artículo 12. Las cooperativas pueden realizar toda clase de actividades lícitas y asociarse con otras personas jurídicas a condición de que sea conveniente para su objeto social y que no desvirtúen su propósito de servicio, ni transfiera beneficios fiscales propios. También podrán asociarse con los entes estatales, en actividades relacionadas con la prestación de servicios públicos.

Artículo 13. Las cooperativas podrán prestar servicios a terceros. pero tales servicios no podrán realizarse en condiciones más favorables que el prestado a los asociados ni en menoscabo de los servicios a éstos.

CAPÍTULO II

Constitución y Registro

Artículo 14. Toda cooperativa se constituirá en asamblea que celebrarán los interesados, en la que se aprobará el estatuto. se suscribirán las aportaciones y se elegirán, en forma escalonada los integrantes de la junta de directores, todo lo cual constará en el acta de constitución. El acta de asamblea constitutiva será firmada por los asociados fundadores, anotando el número de su cédula de identidad personal y el valor de sus aportaciones iniciales.

El número mínimo de fundadores será de veinte asociados, pero podrá aceptarse una cantidad menor autorizada por el IPACOOOP.

Artículo 15. La persona elegida presidente de la junta de directores será responsable de tramitar el reconocimiento de la personería jurídica de la cooperativa mediante solicitud elevada en papel simple ante el PACOOOP, que concederá la personería jurídica, previo cumplimiento y verificación de los siguientes requisitos:

1. Cinco copias del acta de la asamblea de constitución, debidamente firmada, y la lista de los fundadores.
2. Texto completo original del estatuto, con cuatro copias;
3. Certificación de educación cooperativa, otorgada por el IPACOOOP a los fundadores, con una intensidad no inferior a veinte horas.
4. Estudio de viabilidad económica y social.
5. Certificación de la entidad financiera sobre el número de cuentas y monto de los depósitos correspondientes, por lo menos al veinticinco por ciento (25%) de los aportes suscritos por los fundadores.

Artículo 16. El IPACOOOP tendrá la obligación de pronunciarse, en el término de sesenta días, sobre cualquier gestión dirigida al reconocimiento de la personera jurídica de la cooperativa, siempre que ésta haya cumplido a cabalidad con los requisitos establecidos para tal fin, vencido ese término, sin que se haya dado un pronunciamiento al respecto, la cooperativa podrá solicitar al IPACOOOP su inscripción y se considerará inscrita de pleno derecho en el Registro de Cooperativas.

Artículo 17. Las cooperativas constituidas en la forma que prescribe esta Ley, serán personas jurídicas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser representadas judicial y extrajudicialmente.

Artículo 18. El estatuto de la cooperativa debe estar firmado por el presidente y el secretario y contendrá:

1. Su denominación con indicación de su responsabilidad, prevista en esta Ley.
2. Su domicilio y ámbito territorial de operaciones.
3. El objeto de la asociación, expresando las actividades que se propone desarrollar.
4. Normas sobre integración cooperativa.
5. Los deberes y derechos de los asociados, garantizando la absoluta igualdad entre ellos.
6. Las condiciones de admisión y retiro voluntario y las causas de exclusión de los asociados.
7. El régimen de sanciones, causas y procedimientos.
8. La especificación del porcentaje máximo de las aportaciones que cada asociado puede poseer.
9. La forma de pago y reintegro de las aportaciones.
10. La manera de constituir e incrementar o reducir el capital social.
11. El modo de evaluar los bienes o derechos que se hubieren aportado.
12. La forma de constituir los fondos sociales, su objeto y regla para su aplicación.
13. La forma y regla de distribución de los excedentes o de las pérdidas resultantes del respectivo ejercicio social.
14. La forma de liquidar las aportaciones y las limitaciones que al efecto se estipulen.
15. La duración del ejercicio socioeconómico, que no deberá ser mayor de un año. No obstante, podrá haber una excepción en el primer año.
16. La forma de ejercer el voto.
17. El monto y la clase de garantía que deberá constituir la cooperativa, sobre el personal a cuya custodia se encuentren los bienes o fondos de la asociación.
18. Los requisitos que se seguirán para la reforma del estatuto.
19. La fecha fija de cada año en que se reunirá la asamblea.
20. La forma como la cooperativa reglamentará internamente el uso y usufructo de sus bienes.

Artículo 19. Los actos celebrados y los documentos suscritos en nombre de la cooperativa antes de su constitución legal, salvo los necesarios para obtener su inscripción en el Registro de Cooperativas, hacen solidariamente responsable a quienes los celebren o suscriban. Inscrita la cooperativa, dichos actos podrán ser convalidados si lo ratifica la primera asamblea posterior. Para el fin de ejecutar los registros se crea dentro del IPACCOP, el Registro de Cooperativas cuyo funcionamiento será reglamentado por esta institución.

Artículo 20. Las Reformas estatutarias serán propuestas por un número no menor del diez por ciento (10%) de los asociados, que determine el estatuto o la junta de directores. La inscripción de las reformas estatutarias y del reglamento que no sean de mera administración interna, se tramitarán con el mismo procedimiento establecido para la inscripción de las cooperativas. Entrarán en vigencia a partir de su inscripción en el Registro de Cooperativas.

Artículo 21. Una o más cooperativas podrán ser absorbidas por otra del mismo carácter, mediante su incorporación a ésta, adoptando la denominación y la personalidad jurídica de la absorbente. Igualmente, dos o más cooperativas podrán fusionarse por integración, mediante la adopción de una nueva personalidad jurídica y denominación social distinta, con el fin de constituir otra cooperativa regida por un nuevo estatuto. Tanto la cooperativa absorbente, en el caso de fusión por absorción, como la nueva cooperativa en el caso de fusión por integración, asumirán todas las obligaciones y derechos de las cooperativas absorbidas o integradas en la fecha en que la fusión respectiva quede inscrita en el registro de cooperativas, tanto las absorbidas como las integradas dejarán de existir, las cooperativas podrán transformarse en otra cooperativa.

Artículo 22. Podrán existir cooperativas juveniles, escolares o comunales, regidas por los principios de esta Ley y fomentadas por el IPACCOOP, parágrafo, se incluye, como parte integral de esta Ley, el texto completo del Decreto 31 de 1981, en lo que trata sobre las cooperativas juveniles, escolares y comunales.

Artículo 23. Las cooperativas extranjeras, que estén legalmente constituidas en su país de origen y observen los principios cooperativos establecidos en esta Ley, podrán inscribirse para asociarse con cooperativas panameñas de su misma finalidad. La inscripción en el Registro de Cooperativas se realizará sobre la base de reciprocidad con el país de origen, previa presentación de la documentación debidamente legalizada.

Artículo 24. Se consideran entidades auxiliares del cooperativismo, las asociaciones, fundaciones, sociedades y cualquier otra persona jurídica sin fines de lucro, nacionales o internacionales, debidamente reconocidas por el IPACCOOP, cuyos objetivos sean el fomento, financiamiento, educación, capacitación, asistencia técnica y, en general, el desarrollo del movimiento cooperativo.

CAPÍTULO III

Asociados

Artículo 25. Podrán asociarse a las cooperativas:

1. Las personas naturales con capacidad legal y a través del padre o tutor, los menores de edad que hayan cumplido diez años.
2. Las personas jurídicas de derecho público, sin fines de lucro, y otras cooperativas.
3. En las cooperativas juveniles, escolares o comunales, los alumnos de las escuelas primarias o secundarias sin límite de edad. Los asociados deben reunir los requisitos y condiciones exigidos en el estatuto correspondientes.

Artículo 26. La calidad de asociados de una cooperativa, la adquieren:

1. Los fundadores, a partir de la fecha de la asamblea de constitución.
2. Los que ingresan posteriormente, a partir de la fecha en que sean aceptado por la junta de directores.

Artículo 27. La responsabilidad económica de los asociados para con la cooperativa y para con terceros, será determinada por el estatuto sobre la base de igualdad y podrá ser limitada a sus aportaciones o suplementaria.

En este último caso se fijará el respectivo monto adicional de compromiso.

Artículo 28. Son deberes de los asociados sin perjuicio de otros que establezcan esta Ley y el estatuto:

1. Cumplir sus obligaciones sociales con aportes económicos, intelectuales y morales.

2. Desempeñar los cargos para los que fueron elegidos.
3. Cumplir los acuerdos de la asamblea y de la junta de directores.
4. Ser solidarios en sus relaciones con la cooperativa y con los asociados.
5. Abstenerse de incurrir en actos de omisiones que afecten la estabilidad económica o el prestigio de la cooperativa.

Artículo 29. Sin perjuicio de otros que establezcan esta Ley y el estatuto el asociado tendrá los siguientes derechos.

1. Utilizar los servicios de la cooperativa y realizar con ella las operaciones propias de su objeto social.
2. Participar con voz y voto en las asambleas sobre la base de igualdad.
3. Ser elegido para desempeñar cargos en los cuerpos directivos.
4. Solicitar a la junta de directores. y recibir de ésta, información sobre el desenvolvimiento de la cooperativa.
5. Formular denuncias por incumplimiento de la Ley, del estatuto o de los reglamentos, ante la junta de vigilancia.
6. Retirarse voluntariamente de la cooperativa.
7. Apelar, ante la asamblea contra cualquier decisión que afecte sus derechos.

Artículo 30. Podrán establecerse juntas arbitrales para la decisión, provisional o inmediata, sobre las diferencias que puedan ocurrir entre la cooperativa y sus asociados o entre éstos, siempre que dichas diferencias tengan relación con la cooperativa. Las decisiones de dichas juntas tendrán carácter transitorio y obligatorio, mientras no se dicte fallo revocatorio por la autoridad judicial competente. El término para recurrir judicialmente contra tales decisiones de las juntas, es de un año contado a partir de la fecha del laudo arbitral. Pasado dicho término sin haberse recurrido en su contra, la decisión arbitral respectiva tendrá carácter definitivo y hará tránsito a cosa juzgada.

Artículo 31. La calidad de asociado se pierde por:

1. Muerte del asociado o disolución de la persona jurídica.
2. Renuncia escrita presentada ante la junta de directores.
3. Expulsión.

El estatuto deberá establecer requisitos y procedimientos para el retiro voluntario y la expulsión de asociados y directivos.

Artículo 32. Los asociados podrán ser excluidos o suspendidos en sus derechos, por las causas previstas en el estatuto o en los reglamentos.

Artículo 33. En caso de retiro por cualquier causa, el asociado tiene derecho a que se reembolsen sus aportaciones en un término no mayor de un año, siempre que la cooperativa se encuentre en estado de solvencia y liquidez. De no encontrarse en este estado, el retiro de las aportaciones no podrá darse hasta su normalización. Las aportaciones pendientes de reembolso devengan un interés equivalente al porcentaje del interés legal vigente.

Artículo 34. Ninguna liquidación definitiva, en favor del asociado, será practicada sin haberse descontado previamente las deudas que tuviere con la cooperativa. Los excedentes, intereses y depósitos que un asociado tenga en la cooperativa, podrán ser aplicados por ésta, en ese orden y hasta donde alcancen a extinguir deudas exigibles a su cargo, por obligaciones voluntarias o legales a favor de la cooperativa.

CAPÍTULO IV

Régimen Administrativo

Artículo 35. El régimen de la cooperativa será democrático y lo ejercerán los siguientes órganos de gobierno:

1. La Asamblea
2. La junta de directores
3. La junta de vigilancia, colaborarán con la función de gobierno, el comité de educación, el comité de crédito y otros que designe la junta de directores. Colaborarán con la función de gobierno, el comité de educación, el comité de crédito y otros que designe la junta de directores.

SECCIÓN I

Dirección

Artículo 36. La asamblea es la Autoridad máxima de la cooperativa y sus decisiones son de obligatorio cumplimiento para los cuerpos directivos y para los asociados, presentes o ausentes, siempre que se hubieran adoptado de conformidad con la Ley, el estatuto y los reglamentos. Integran la asamblea los asociados hábiles o los delegados designados por éstos para efectos del presente artículo, 10, son asociados hábiles los inscritos en el registro cooperativo que no tengan suspendidos sus derechos.

Artículo 37. La asamblea se reunirá en sesión ordinaria, dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio socioeconómico, para tratar los temas previstos en la convocatoria. La asamblea podrá reunirse en sesión extraordinaria, cuando las circunstancias lo requieran, a efecto de tratar los asuntos para lo cual sea convocada.

Artículo 38. La asamblea ordinaria o extraordinaria será convocada por la junta de directores, ya sea por resolución propia o a solicitud de la junta de vigilancia o del diez por ciento (10%) de los asociados. Cuando la junta de directores negase la solicitud, la junta de vigilancia podrá convocarla. Si ninguna de las juntas accediera a dicha solicitud, el diez por ciento (10%) de los asociados podrá solicitarlo al IPACOOOP, que se pronunciará dentro de los sesenta días siguientes.

Artículo 39. En todos los casos, la convocatoria debe realizarse con la adecuada publicidad y una anticipación no menor de ocho días, en la forma prevista por el estatuto, incluyendo el temario respectivo. Con la misma anticipación deberá informarse al IPACOOOP.

Artículo 40. La Asamblea sesionará válidamente con la presencia de más de la mitad de los asociados hábiles o delegados. Si pasada una hora no se hubiere integrado el quórum, podrá sesionar y adoptar decisiones válidas con cualquier número de presentes, siempre que no sea inferior al veinte por ciento (20%) de los asociados hábiles. Si aún no se lograra el quórum, se hará una nueva convocatoria, que fijará la asamblea para una fecha no anterior a los ocho días calendarios siguientes. En esta segunda fecha la asamblea se realizará con los cuerpos directivos y los asociados que asistan.

Artículo 41. Cuando el número de asociados fuera superior a doscientos o éstos residieran en lugares distantes, la asamblea podrá ser constituida por delegados elegidos conforme al procedimiento previsto en el estatuto. Cuando la cooperativa tenga más de dos mil quinientos asociados, la asamblea se efectuará por delegados. Cada delegado representará a un número no menor de veinte ni mayor de cien, conforme al

procedimiento prescrito en el estatuto. El máximo de la asamblea de delegados será de mil.

Artículo 42. Las resoluciones o acuerdos de asamblea se adoptarán por mayoría simple de votos, salvo los asuntos para los que esta Ley o el estatuto requieran un número mayor.

Artículo 43. Es competencia exclusiva de la asamblea, sin perjuicio de otros asuntos que esta Ley o el estatuto le señalen:

1. Aprobar o modificar el estatuto.
2. Elegir y/o remover a los miembros de los cuerpos directivos.
3. Examinar los informes de los cuerpos directivos.
4. Estudiar y pronunciarse sobre los estados financieros.
5. Decidir sobre la distribución de excedentes.
6. Resolver la emisión de obligaciones y títulos valores.
7. Decidir sobre la adopción de medidas de responsabilidad contra los miembros de los cuerpos directivos.
8. Decidir los cambios substanciales en el objeto social.
9. Aprobar la adquisición, construcción y venta de bienes raíces o el financiamiento de proyectos o contratos, que afecten más del quince por ciento (15%) del patrimonio de la cooperativa.
10. Fijar las capitalizaciones extraordinarias
11. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos y el plan de inversión.
12. Expulsión del asociado y directivo en grado de apelación.

Los asuntos que tratan los numerales 1 , 5, 7, 8 y 9 de este artículo, requieren dos tercios (2/3) de los votos de los asociados presentes en la asamblea.

Artículo 44. Los miembros principales de los cuerpos directivos, están obligados a asistir puntualmente a las asambleas, sujetos a las sanciones que establezcan la Ley y su reglamento, el estatuto y los reglamentos de la cooperativa.

Los asociados comprendidos en el párrafo anterior podrán participar en las deliberaciones, pero no votarán en asuntos vinculados con su actuación.

SECCIÓN II

Administración

Artículo 45. La junta de directores, órgano encargado de la administración permanente de la cooperativa, deberá fijar las políticas generales para el cumplimiento del objeto social y velará por la ejecución de los planes acordados por la asamblea. Sus atribuciones serán determinadas en el estatuto, sin perjuicio de las establecidas por la Ley. Se consideran facultades implícitas de este órgano, las que la Ley y el estatuto no reserven expresamente a la asamblea las que resulten necesarias para la realización de las actividades, en cumplimiento del objeto social.

Artículo 46. La junta de directores estará integrada por un número impar de directores principales determinados por el estatuto, no menor de cinco ni mayor de nueve. La junta de directores designará, de su seno, a los dignatarios, que serán un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y vocales, cuyas atribuciones serán precisadas en el estatuto. La representación legal de la cooperativa recaerá sobre el presidente de la junta de directores. Sólo los asociados-personas naturales podrán pertenecer a la junta de directores, a la junta de vigilancia, o ser dignatarios o representante legal de las cooperativas. De igual modo, sólo podrá designarse gerente a una persona natural.

Artículo 47. Los miembros de la junta de directores serán elegidos por la asamblea, para un período de tres años, y serán renovados cada año en la forma que establece el estatuto. Podrán ser reelegidos por un período adicional consecutivo. Los suplente serán elegidos por la asamblea y reemplazarán a los titulares, en caso de ausencia temporal o definitiva, por el resto del período del directivo saliente.

Artículo 48. La junta de directores debe establecer las reglas de su funcionamiento, reunirse por lo menos cada mes y elaborar las actas, que serán suscritas por el Presidente y el Secretario. El quórum lo constituye más de la mitad de sus miembros. Las instituciones públicas y privadas tendrán especial consideración en la concesión de permisos a los miembros directivos de las cooperativas, sobre base documentada, para reuniones, seminarios, cursos o eventos en los cuales participen.

Artículo 49. Los miembros de la junta de directores responden, ante la asamblea, por violación de la Ley el estatuto o los reglamentos, sin perjuicio de las acciones penales y civiles que les correspondan. Sólo podrán eximirse cuando no hayan participado en la reunión que adoptó la resolución, o cuando exista constancia en acta de su voto en contra.

Artículo 50. Las decisiones de la junta de directores podrán ser recurridas por los asociados, en grado de reconsideración, ante el mismo organismo; y en grado de apelación ante la asamblea.

Artículo 51. La junta de directores designará un gerente, que podrá ser o no asociado y cuyas atribuciones se fijarán en el estatuto de la cooperativa.

Artículo 52. El gerente responderá, ante la junta de directores, por los daños y perjuicios que ocasionare por incumplimiento de sus obligaciones, negligencia, dolo, abuso de confianza y por el ejercicio de actividades en competencia con la cooperativa, sin perjuicio de las acciones penales y civiles que correspondan.

Artículo 53. Las asociaciones cooperativas que por su naturaleza tengan que conceder préstamos a sus asociados, tendrán un comité de crédito integrado por tres asociados, nombrados o elegidos en la forma que establezca el estatuto y sus atribuciones serán precisadas en éste ningún miembro del comité de crédito ni de la junta de vigilancia, podrá formar parte de otros comités o comisiones. En materia de responsabilidad, rigen para los miembros del comité de crédito, las disposiciones establecidas para la junta de directores.

Artículo 54. A la fecha de cierre del ejercicio socioeconómico, la junta de directores presentará, ante la asamblea, la memoria sobre la gestión realizada que, con los estados financieros, será sometida a consideración de la asamblea con el informe de la junta de vigilancia.

SECCIÓN III

Junta de Vigilancia

Artículo 55. La junta de vigilancia, órgano fiscalizador de la actividad socioeconómica y contable de la cooperativa, velará por el estricto cumplimiento de la Ley y su reglamento, el estatuto y las decisiones de la asamblea.

Ejercerá sus atribuciones de modo que no interfiera las funciones y actividades de los otros órganos.

Artículo 56. La junta de vigilancia estará integrada por tres asociados elegidos por la asamblea, para un período de tres años y se renovará parcialmente cada año en la forma que indique el estatuto. La junta de vigilancia elegirá, de su seno, un presidente, un vicepresidente y un secretario, cuyas atribuciones serán precisadas por el estatuto.

Artículo 57. Cuando la junta de vigilancia considere que un acuerdo tomado por la junta de directores es lesivo a los intereses de la cooperativa, notificará al presidente de la junta de directores su desacuerdo, con las justificaciones respectivas, en un término no mayor de dos días hábiles después de haber recibido dicho acuerdo. El presidente de la junta de directores suspenderá el efecto del acuerdo y convocará a reunión extraordinaria, para que la junta de directores reconsidere el acuerdo, impugnado en un término no mayor de treinta días hábiles. En caso de que la junta de directores ratifique su decisión, la junta de vigilancia podrá someter el caso a la próxima asamblea.

Artículo 58. Rigen para la junta de vigilancia, en materia de suplencia y responsabilidad, las disposiciones sobre reglas de funcionamiento, establecidas para la junta de directores.

SECCIÓN IV

Disposiciones Comunes

Artículo 59. Los cargos electivos no se podrán ejercer por más de dos períodos consecutivos, ni ejercerse simultáneamente en más de un órgano cuya elección sea privativa de la asamblea. Tampoco podrá ser elegido ni desempeñar cargos electivos, el asociado moroso con la cooperativa o el suspendido en el ejercicio de sus derechos.

Artículo 60. La asamblea puede revocar, en cualquier tiempo, por causa justificado, la designación de los miembros de los cuerpos directivos.

Artículo 61. Los miembros de los cuerpos directivos no pueden desempeñar cargos remunerados en las cooperativas, mientras dure su mandato, con excepción de las cooperativas que, por la naturaleza de sus fines o conveniencia de sus servicios, deben funcionar con el trabajo personal de sus asociados.

Artículo 62. Ningún miembro de los cuerpos directivos podrá dedicarse, por cuenta propia o ajena a labores o actividades similares a las que la cooperativa ejerza, cuando a juicio de ésta, dicha actividad perjudique los fines de la cooperativa. Si hiciere deberá renunciar inmediatamente.

Artículo 63. Los miembros de los cuerpos directivos, los gerentes y todas aquellas personas que tengan a su cuidado los fondos de la cooperativa, deberán asegurar su manejo en la forma y en el término que establezca el estatuto.

CAPÍTULO V

Régimen Económico

Artículo 64. El patrimonio de la cooperativa estará constituido por las aportaciones de los asociados, la parte de los intereses y excedentes que la asamblea no haya resuelto capitalizar, así como por las reservas los subsidios, donaciones, legados y otros recursos análogos que reciba con destino el incremento patrimonial.

Artículo 65. Las aportaciones estarán sujetas a las siguientes normas:

1. Podrán pagarse en dinero, ser-vicios. bienes muebles o inmuebles. según la naturaleza de la cooperativa y que de acuerdo con lo que disponga el respectivo estatuto.
2. Las pagadas en bienes o ser- vicios se valorarán de acuerdo con el procedimiento que señale la presente Ley y por peritos nombrados por la junta de directores.
3. Serán nominativas, indivisibles e intransferibles y podrán re presentarse en las condiciones que determine el estatuto. En ningún caso tendrán el carácter de títulos valores.
4. Sólo podrán ser embargadas por los acreedores de la cooperativa, dentro de los límites del capital y responsabilidad social. Los acreedores podrán ejercer los derechos de la asociación, relativos a los aportes del capital no pagado, siempre que fueren exigibles, y necesarios para el pago de las deudas sociales. El privilegio otorgado a los referidos acreedores, no excluye los derechos preferentes de la cooperativa cuando ésta tenga que proceder contra sus asociados.

Artículo 66. Cada asociado, al ingresar a la cooperativa suscribirá el monto total de sus aportaciones y pagará, al menos, una aportación. La parte no pagada por los asociados se considerará una obligación exigible por parte de la cooperativa, según se establezca en el estatuto. Estas aportaciones podrán incrementarse en proporción al uso que haga de los servicios de la cooperativa en la forma prescrita por el estatuto.

Artículo 67. Las aportaciones de los asociados a la cooperativa en bienes o servicios, se valorarán de la siguiente manera:

1. Los bienes muebles o inmuebles serán valuados por peritos nombrados por la junta de directores, y el valor resultante deberá ser aceptado por los miembros de la junta de directores y el asociado.
2. El valor de los servicios no podrá ser inferior al establecido por la Ley como salario mínimo, en el lugar, y debe ser aceptado por la junta de directores y el asociado.
3. El valor de los bienes o servicios será acreditado a la cuenta de las aportaciones del asociado.

Artículo 68. El estatuto deberá establecer el capital social mínimo.

Artículo 69. El ejercicio socio-económico será de doce meses, comprendido dentro de un período cuya fecha de inicio y terminación establecerá el estatuto.

Artículo 70. Los excedentes que arroje el balance anual, después de descontados los gastos generales y las provisiones, serán distribuidos por acuerdo de la asamblea, en la siguiente forma y orden de prelación:

1. Por lo menos, el diez por ciento (10%) para la reserva patrimonial; nueve y medio por ciento (9.5%) para el fondo de previsión social; diez por ciento (10%) para el fondo de educación; medio por ciento (0.5%) para el fondo de integración y cinco por ciento (5%) para constituir, en IPACOOOP, el fondo anual especial para el fomento y desarrollo cooperativo.
2. La suma que señala el estatuto o la asamblea para fines específicos,
3. El interés que devenguen las aportaciones, conforme lo establezca el estatuto.
4. La devolución a los asociados, en proporción a las operaciones que hubieran efectuado con la cooperativa o a su participación en el trabajo común.

Artículo 71. La asamblea podrá acordar la capitalización de los intereses y excedentes correspondientes a los asociados, en vez de distribuirlos en efectivo.

Artículo 72. La reserva patrimonial tiene por objeto asegurar a las cooperativas la normal realización de sus actividades, habilitarlas para cubrir las pérdidas que se produzcan en un ejercicio económico y ponerlas en situación de satisfacer exigencias imprevistas o necesidades financieras que puedan presentarse. y se regirá por las disposiciones siguientes:

1. Será facultad de la asamblea establecer que la reserva patrimonial sea limitada y tal determinación deberá establecerse en el estatuto de la cooperativa.
2. Cuando la reserva patrimonial sea limitada. no podrá exceder del veinte por ciento (20%) de las aportaciones pagadas.
3. Para constituir e incrementar la reserva patrimonial. se destinará, por lo menos, el diez por ciento (10%) de los excedentes netos obtenidos. Ingresarán, además, los fondos irrepartibles y todas las sumas que no tuvieren destino específico, sin perjuicio de que pueda incrementarse por otros medios.
4. Si la reserva patrimonial disminuyese por cualquier causa, el IPACOOOP deberá ser notificado inmediatamente. Los excedentes futuros serán utilizados para restituir el nivel que tenía anteriormente.

Artículo 73. El fondo de previsión social no podrá exceder del veinte por ciento (20%) de la suma de las aportaciones pagadas por los asociados, más los excedentes no distribuidos, y se sujetará a las disposiciones siguientes:

1. Cuando este fondo exceda al tope máximo establecido, el excedente será transferido a la reserva patrimonial o al fondo de educación.
2. Cuando lo disponga la asamblea, el fondo de previsión social se podrá utilizar para seguros colectivos sobre riesgos inherentes a las actividades que realicen, indemnizaciones a familiares en caso de muerte de asociados, asistencia médica y donaciones sociales. Las cooperativas establecerán reglamentos para tales servicios.

Artículo 74. El fondo de educación tiene por objeto proporcionar, a las cooperativas, los medios necesarios para asegurar el funcionamiento del comité de educación. Si se comprobara la no utilización del fondo de educación por dos períodos consecutivos, deberá ser transferido en su totalidad a su respectiva federación o al IPACOOOP, para ser utilizado en fines educativos.

Artículo 75. El fondo de integración será entregado por las cooperativas de primer y segundo grado, a la confederación de cooperativas, para el fomento o funcionamiento, educación y asistencia técnica. Parágrafo transitorio Hasta tanto la confederación de cooperativas se constituya, el fondo de integración será entregado al Consejo Nacional de Cooperativas (CONALCOOP).

Artículo 76. El fondo especial para el fomento y desarrollo del cooperativismo, es un recurso económico que las cooperativas de primer y segundo grado entregarán al IPACOOOP, para apoyar programas específicos de fomento y desarrollo cooperativo. Este fondo será administrado por un comité integrado así: un representante del IPACOOOP, un representante del Contralor de la República y un representante del CONALCOOP. Hasta tanto la confederación se constituya, este fondo sólo podrá emplearse en programas de capacitación, educación y asistencia técnica, se prohíbe el empleo de sus recursos para el nombramiento de personal administrativo.

Artículo 77. Las cooperativas podrán constituir y manejar, de acuerdo con las leyes vigentes, fondos de retiros, cesantías y pensiones y jubilaciones especiales, directamente o por medio de sus federaciones y entidades auxiliares, estos fondos serán inembargable.

Artículo 78. La cooperativa podrá crear un fondo rotatorio con los excedentes e intereses de los asociados, que serán devueltos en caso de que éstos se retiren. La junta de directores, deberá reglamentar el aporte mínimo y máximo, que debe ahorrar cada asociado, el período de rotación del fondo y el porcentaje de los intereses y excedentes que se capitalizarán., este fondo se sujetará a las reglas siguientes:

1. El fondo creado con los intereses y excedentes podrá ser incrementado con otros aportes, tales como efectivo descuentos autorizados por el asociado o partidas de los fondos de la cooperativa. En todo caso, el fondo rotatorio debe tener por objetivo el fomento de actividades productivas de la cooperativa.
2. La asamblea podrá acordar el reconocimiento de un interés por el uso del capital aportado a este fondo.

Artículo 79. Las reservas patrimoniales, el fondo de educación, el fondo de previsión social. Así como las donaciones y legados son irrepartibles.

Artículo 80. Las cooperativas podrán emitir certificados de inversión y otros títulos-valores. redimibles y de plazo fijo, emitidos para reforzar el activo de las cooperativas. Su producto se destinará al cumplimiento de objetivos específicos.

La emisión de estos certificados de inversión y otros títulos valores debe ser aprobada por asamblea y autorizada previamente por el IPACOOOP.

Artículo 81. Los certificados de inversión y otros títulos valores serán nominativos y transferibles, y su valor nominal, así como el interés que devenguen, se abonará con preferencia a cualquier otro pago que tenga que realizar la cooperativa.

Artículo 82. Los intereses y de más beneficios que provengan del capital invertido por los asociados, sus depósitos y los títulos valores invertidos por los asociados y terceros estarán exentos de toda clase de impuestos, derechos, contribuciones o gravámenes de carácter general.

Artículo 83. Las cooperativas podrán asumir todas las formas de pasivos y emitir obligaciones que suscribirán los asociados a los terceros conforme a las condiciones que establezca la respectiva reglamentación.

Artículo 84. Las cooperativas podrán recibir de personas públicas o privadas, asignaciones, legados y otros aportes destinados a incrementar su patrimonio o a ser consumidos de conformidad con la voluntad del aportante. En ambos casos estarán orientados al cumplimiento del respectivo objeto social.

CAPÍTULO VI

Régimen del Trabajo Social

Artículo 85. Las relaciones de trabajo entre toda asociación cooperativa y sus trabajadores asociados o no, se regirán por la legislación laboral existente, excepto las cooperativas de trabajo.

Artículo 86. En las cooperativas de trabajo asociado en que los asociados son, al mismo tiempo, los trabajadores y gestores de la empresa, el régimen de trabajo, previsión, seguridad social y compensación, será establecido en el estatuto y en el reglamento.

CAPÍTULO VII

Disolución y Liquidación

Artículo 87. Las asociaciones cooperativas se disolverán y liquidarán según el caso, por voluntad de las dos terceras (2/3) partes de los asociados reunidos en asamblea, por cualquiera de las siguientes causas:

1. Disminución del número de asociados a menos del mismo fijado por esta Ley o por su reglamento.
2. Imposibilidad de realizar el objetivo específico para el que fue constituida o por extinción de éste.
3. Estado de insolvencia.
4. Fusión o incorporación a otra; asociación cooperativa. Las cooperativas fusionadas o incorporadas dejarán de existir en la fecha en que la fusión o incorporación quede inscrita en el Registro de Cooperativas.
5. Por cualquier causa que haga imposible el cumplimiento de sus fines sociales o económicos.

Artículo 88. El IPACOOOP podrá declarar de oficio la disolución de aquellas cooperativas en las que exista alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, si el órgano o entidad correspondiente no lo hubiese declarado oportunamente. Antes de proceder a la disolución, el IPACOOOP dará un plazo prudencial a la cooperativa para que subsane la causal o para que en el mismo término convoque a asamblea con el fin de acordar la disolución.

Artículo 89. El acuerdo de disolución será comunicado al IPACOOOP, en un término no mayor de ocho días siguientes a su aprobación, decretada la disolución, la cooperativa quedará en estado de liquidación y el IPACOOOP constituirá una comisión liquidadora integrada por tres personas; una nombrada por la federación respectiva u otro organismo de integración y dos nombradas por el IPACOOOP. Los honorarios serán fijados y regulados por el IPACOOOP, en el mismo acto de constitución de la comisión. y se pagarán con fondos de la cooperativa.

Artículo 90. La comisión liquidadora ejercerá la representa legal de la cooperativa, y le corresponde realizar el activo y cancelar el pasivo. En el registro de la cooperativa y en todas las comunicaciones que esta haga, se anotarán marginalmente las palabras en liquidación. Al concluir los trámites pertinentes, se procederá igualmente a cancelar la inscripción. A partir del momento en que se ordene la liquidación las obligaciones en término, a cargo de la cooperativa, serán exigibles, pero sus bienes no podrán ser embargados.

Artículo 91. Dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se haya constituido la comisión liquidadora, ésta deberá presentar al IPACOOOP un proyecto de liquidación. Esta institución resolverá lo pertinente, dentro de los diez días siguientes.

Artículo 92. Son deberes de la comisión liquidadora, los siguientes:

1. Poner en conocimiento del público el acuerdo de disolución, mediante aviso por cinco publicaciones, en periódicos de circulación nacional.
2. Concluir las operaciones pendientes al momento de la disolución.

3. Efectuar el inventario de los activos patrimoniales de los pasivos de cualquier naturaleza, de los libros y de los documentos.
4. Exigir cuenta de su administración a las personas que hayan manejado intereses de la cooperativa y no hayan obtenido el finiquito correspondiente, a ser como poner en conocimiento de las autoridades judiciales las denuncias correspondientes.
5. Liquidar y cancelar las cuentas de la cooperativa a cada uno de los asociados y terceros conforme al orden de prioridad.
6. Cobrar los créditos, percibir su importe y otorgar los correspondientes finiquitos.
7. Enajenar los bienes de la cooperativa.
8. Informar periódicamente del estado de la liquidación a los asociados y acreedores.
9. Rendir cuentas periódicas de su mandato y, al final de la liquidación, presentar el informe respectivo y obtener del IPACOOOP el finiquito.
10. Los demás que se deriven de la naturaleza de la liquidación y del propio mandato.

Artículo 93. En caso de liquidación, el patrimonio se utilizará para hacer los pagos correspondientes, de acuerdo con el orden de prioridad siguiente:

1. Gasto de liquidación.
2. Salarios y prestaciones sociales causados hasta el momento de la disolución.
3. El valor de los certificados de inversión y otros títulos valores.
4. Cancelación de las obligaciones contraídas con sus acreedores.
5. Devolución, a los asociados, del valor de sus aportaciones o la parte proporcional que les corresponda, en caso de que el haber social no fuera suficiente.
6. Distribuir entre los asociados sus aportaciones y los excedentes pendientes de pago.
7. Entregar el saldo final, si lo hubiere, al IPACOOOP.

Artículo 94. Los liquidadores actuarán por consenso, y las discrepancias que se presenten entre ellos serán resueltas por el IPACOOOP.

TÍTULO II

Integración Cooperativa

CAPÍTULO I

Integración Vertical

Artículo 95. Las cooperativas de primer grado, una vez constituidas, podrán integrarse en federaciones nacionales y éstas, a su vez en confederaciones.

Artículo 96. Las federaciones son cooperativas de segundo grado integradas por no menos de tres cooperativas de primer grado existentes dentro del ámbito de la República. Sólo existirá una federación por cada tipo de cooperativas y tendrá los siguientes objetivos primordiales:

1. Promover la organización y el desarrollo de cooperativas de su misma actividad.
2. Representar y defender los intereses de sus asociadas, así como coordinar y vigilar sus actividades.
3. Proporcionar a sus afiliados la asistencia técnica y asesora general, en coordinación con el IPACOOOP.
4. Realizar actividades para el aprovechamiento común de bienes y servicios y el mejor logro de sus fines, tales como suministro, comercialización, mercadeo o industrialización de productos; financiamientos, seguros, establecimiento de fondos de protección y estabilización, servicios contables y de auditoría, así como cualquier otra actividad similar.
5. Fomentar y desarrollar programas de educación cooperativa, de acuerdo con los lineamientos generales de las federaciones en coordinación con el IPACOOOP.

Artículo 97. Las cooperativas y las federaciones, cuando lo estimen conveniente, con previa autorización del IPACOOOP, podrán unirse para crear organizaciones de seguros u otras actividades y ofrecer estos servicios, que se regirán en sus aspectos técnicos, conforme a las normas generalmente aceptadas.

Artículo 98. Las federaciones serán consultadas por el gobierno nacional, a fin de tomar decisiones relacionadas al respectivo ramo de su actividad, y tendrán representación en todos los organismos oficiales y semioficiales, con la finalidad de procurar el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales de los asociados.

Artículo 99. La Confederación Nacional de Cooperativas será una cooperativa de tercer grado, integrada por no menos de cuatro federaciones nacionales. Además de llevar la representación del cooperativismo nacional, tendrá otras funciones y objetivos que le señalen su estatuto, así como toda función tendiente a promover el desarrollo cooperativo.

Existirá una sola confederación de cooperativas que será la entidad a la cual el Estado consultará, principalmente, todo lo referente a la formulación de políticas y leyes relacionadas con el cooperativismo. Igualmente, será el organismo consultado por el sector público para la preparación de los planes nacionales de desarrollo del país. Las entidades auxiliares y los sectores cooperativos no constituidos en federaciones, estarán representados en la confederación. El estatuto de ésta determinará el alcance de su participación.

Artículo 100. Las federaciones podrán aceptar como asociadas a las cooperativas de servicios múltiples y otras entidades sin fines de lucro, siempre que éstas realicen actividades y funciones similares complementarias a la federación.

Artículo 101. Las federaciones y la confederación podrá asociarse o afiliarse a cualquier asociación, unión, central, confederación ya otras entidades cooperativas, nacionales o internacionales.

Artículo 102. La constitución, reconocimiento y funcionamiento de las federaciones y de la confederación de cooperativas, mencionadas en este capítulo, se regirán por las disposiciones de esta Ley y su reglamento. La administración y funcionamiento interno de estos organismos, se regirán por lo que establezca el estatuto.

CAPÍTULO II

Integración Horizontal

Artículo 103. Las cooperativas podrán efectuar acuerdos para intercambiar servicios celebrar contratos de participación, complementar actividades, cumplir en forma más adecuada el objetivo social y llevar a la práctica empresarial el principio de integración cooperativa.

Artículo 104. En el caso de los acuerdos de que trata el artículo anterior, las cooperativas podrán integrarse así:

1. En unión, las cooperativas de primer grado y diferente actividad principal.
2. En central, las cooperativas de primer grado y de igual actividad principal. Las uniones y centrales se regirán por lo pactado, lo que no implicará fusión de las cooperativas.

Artículo 105. Las cooperativas podrán convenir la realización de una o más operaciones en forma conjunta, estableciendo cuál de ellas debe asumir la gestión y la responsabilidad ante terceros.

TÍTULO III

Relación de las Cooperativas con la Administración Pública

CAPÍTULO I

Fomento

Artículo 106. Sin perjuicio de las exenciones especiales establecidas por esta Ley y otras leyes, las asociaciones cooperativas estarán exoneradas de todo impuesto nacional, contribución, gravamen, derechos, tasas y arancel de cualquier clase o denominación, que recaiga o recayera sobre lo siguiente:

1. Constitución, reconocimiento, inscripción y funcionamiento de cooperativas, así como las actuaciones judiciales en que éstas intervengan, activa o pasivamente, ante los tribunales jurisdiccionales.
2. El pago de impuestos nacionales sobre aquella porción de bienes reservada exclusivamente para el desarrollo de sus actividades.
3. El pago de papel sellado y notarial, timbres, registros y anotación de los documentos, otorgados por las cooperativas o por terceros a favor de ellas.
4. Importación de maquinaria, equipo, repuesto, combustible, lubricantes, suministros y otros enseres, destinados para sus actividades.

Artículo 107. Las exoneraciones a las cooperativas sobre impuestos nacionales, contribuciones, gravámenes, derechos, tasa y aranceles de cualquier clase o denominación, que recaigan sobre la importación maquinaria, equipo, repuesto, combustible, lubricante y otros enseres destinados para sus actividades, estarán sujetos a los requisitos siguientes.

1. La cooperativa de primer, segundo y tercer grado, los organismos cooperativos internacionales y las entidades auxiliares del cooperativismo, que necesiten y tengan derechos a las exoneraciones que describe el artículo anterior, harán la solicitud correspondiente por intermedio de su representante legal o de quien se delegue.
2. Los nombres de cooperativas, de la federación, de la confederación, de los organismos internacionales o de las entidades auxiliares del cooperativismo, no podrán ser utilizados por personas naturales u otras personas jurídicas, para adquirir bienes. Cualquier persona natural o jurídica que infrinja esta disposición, se hará acreedora a las sanciones que señalen las leyes que rigen la materia.
3. Las importaciones en concepto de maquinaria, equipo, repuestos, combustible y afines, sólo pueden hacerse para el uso y servicio de la cooperativa en el desarrollo de sus actividades.
4. Los bienes importados al país en base a las exoneraciones impositivas, únicamente podrán ser transportados o enajenados transcurrido dos años luego de su introducción previa notificación escrita al IPACOOOP y la realización del respectivo asiento contable. No obstante, se podrá enajenar o traspasar el bien, siempre que se realice el pago del impuesto correspondiente, acto que deberá ser notificado sólo al IPACOOOP.

Artículo 108. Las exenciones establecidas en esta Ley se hacen extensivas a las federaciones, a la Confederación Nacional de Cooperativas ya las entidades auxiliares del cooperativismo, así como a los organismos cooperativos internacionales con oficinas principales en la República de Panamá y que funcionen conforme a acuerdos celebrados por el órgano Ejecutivo, incluido el personal no panameño debidamente acreditado que labore en ellos.

Artículo 109. Las cooperativas o asociaciones de cooperativas gozarán de todas las facilidades con respecto a la exportación de sus productos, sin perjuicio de los convenios de comercio internacional que celebre el Estado.

Artículo 110. El régimen de protección de que gozan las asociaciones cooperativas, no podrán ser menor del que favorezca a otras entidades que tengan principio y objetivos análogos.

Artículo 111. Las donaciones, legados, subsidios y todo otro recurso análogo que reciban las asociaciones cooperativas de parte de cualquier persona natural o jurídica, estarán exentos del pago del impuesto sobre la renta y serán deducibles, al afecto, para quien lo efectúe.

Artículo 112. Los ministerios, entidades autónomas y semiautónomas así como los municipios, darán preferencia y facilidades a la adjudicación en favor de las cooperativas, de aquellas parcelas de terreno que resulten técnicamente apropiadas para el desarrollo de sus actividades. Así mismo, las asociaciones cooperativas podrán comprar o arrendar bienes pertenecientes al Estado y a las entidades autónomas y semiautónomas, sin necesidad de concurrir a licitación pública o a concurso.

Artículo 113. Los ministerios y entidades de fomento o desarrollo, darán preferencia a las cooperativas, en lo concerniente a la asistencia técnica, agropecuaria, crediticia o comercialización de productos.

Artículo 114. El Ministerio de Vivienda, el Banco Hipotecario Nacional, la Caja de Ahorros, el Banco Nacional, la Caja de Seguro Social y cualquier otro organismo estatal, darán facilidades de crédito y asistencia técnica a las cooperativas.

Artículo 115. Toda persona, empresa o entidad oficial o privada, estará obligada, sin costo alguno, a deducir y retener, del sueldo de sus trabajadores, la suma que éstos adeuden a las cooperativas, siempre que los trabajadores sean asociados de las cooperativas acreedoras y que la deuda y causa conste en libranza, pagaré o cualquier otro documento, debidamente firmado por el asociado. Las sumas retenidas deberán ser entregadas a las cooperativas acreedoras, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se realice la deducción, so pena de incurrir en las sanciones fijadas en esta Ley. Además, toda persona, empresa o entidad oficial o privada, estará obligada, sin costo alguno a aceptar la cesión del monto de la planilla tramitada mediante clave, si así lo autoriza la cooperativa en favor de **terceros**.

Artículo 116. Las cooperativas, por su carácter y naturaleza, no estarán sujetas al pago del impuesto sobre la renta.

CAPÍTULO II

Fiscalización Pública

Artículo 117. Las cooperativas, las federaciones, la confederación, los organismos auxiliares y demás organismos cooperativos, de que trata la presente Ley, están sujetos a la fiscalización estatal, encargada de velar para que los actos atinentes a su constitución, funcionamiento, cumplimiento de sus objetivos sociales, disolución y liquidación, se ajusten a las normas legales y estatutarias, y para que los asociados y demás personas actúen conforme a la presente Ley. Las funciones de inspección y vigilancia no implican,

por ningún motivo, facultad de cogestión o intervención en la autonomía jurídica de las cooperativas, sin perjuicio de convocar a los asociados para que resuelvan su situación, o adoptar las medidas sancionatorias y, si es de caso extremo, ordenar la disolución para la liquidación de la cooperativa; todo lo anterior, conforme lo dispone la presente Ley.

Artículo 118. La autoridad de aplicación de la legislación cooperativa y el órgano para la fiscalización pública será el JPACOOOP, y tendrá competencia privativa sobre las actividades que realicen las cooperativas dándoles las autorizaciones o sanciones correspondientes. Se exceptúan las sanciones de carácter sanitario, seguridad social, tránsito y las similares de aplicación general.

Artículo 119. A efecto de cumplir el ejercicio de la función de inspección y vigilancia, el IPACOOOP queda facultado para practicar visitas a las cooperativas, y éstas estarán obligadas a proporcionar cuantos datos y elementos se necesiten o se estimen pertinentes y mostrarán sus libros de contabilidad y documentación a los inspectores designados, permitiéndoles el acceso a sus oficinas, establecimientos y dependencias.

Artículo 120. Las cooperativas deben contar con un servicio permanente de auditoría. Podrán ser eximidas de esta obligación por el IPACOOOP, cuando su situación económica, actividad o ubicación geográfica, lo justifiquen. El servicio de auditoría podrá ser prestado por cooperativas calificadas para brindar este servicio, o por entidades especializadas con idoneidad, debidamente autorizadas por el IPACOOOP.

Artículo 121. El IPACOOOP, dentro de su función de supervisión de las cooperativas, podrá asesorarlas y presentar recomendaciones sobre el funcionamiento administrativo y económico de la cooperativa, de conformidad con los intereses de ésta, la Ley y su reglamento.

Artículo 122. El IPACOOOP, con miras a evitar la liquidación de la cooperativa, podrá convocar a asamblea para que se tomen determinaciones, cuando se presenten las siguientes situaciones:

1. Evidente malversación de fondos.
2. Ineficiencia comprobada de los cuerpos directivos.
3. Reiteradas violaciones a la Ley, su reglamento o al estatuto.
4. Cuando proporcionen información o datos falsos a las autoridades competentes.
5. Alta morosidad de la cooperativa con instituciones de crédito del sector estatal o del sector privado.

Artículo 123. El IPACOOOP. Por autorización de su junta directiva, podrá intervenir la administración de la cooperativa cuando se presenten anomalías que afecten la prestación de servicios públicos o la producción, la venta o distribución de artículos de primera necesidad o cuando se afecte la calidad de éstos. La intervención se mantendrá hasta tanto sea necesaria para subsanar las irregularidades presentadas o hasta que se decreta la disolución para la liquidación, si fuere el caso. Los costos causados por la intervención administrativa serán sufragados por la cooperativa.

Parágrafo. Cuando en el ejercicio de la función establecida en el Artículo 118 de la presente Ley, el IPACOOOP detecte situaciones de malos manejos de los recursos de la cooperativa, que afecten negativamente el patrimonio de y, en consecuencia, los **intereses de sus asociados**, podrá intervenir temporalmente la administración de la cooperativa, sin que medie autorización expresa de su junta directiva. El IPACOOOP

designará para ello un interventor, que estará, además, facultado para interponer las denuncias correspondientes ante las autoridades jurisdiccionales.

CAPÍTULO III

Registro de Informe de Actividades

Artículo 124. Las cooperativas están obligadas a llevar los libros de registro de los asociados, de las actas, de la contabilidad y los demás que exijan la Ley y su reglamento, debidamente legalizados, así como a conservar su documentación ya enviar al IPACOOOP, dentro de los noventa días siguientes al cierre del ejercicio anual, los respectivos balances.

Artículo 125. Los libros contables y sociales que deben llevar las cooperativas, foliados, sellados y rubricados en el IPACOOOP, son:

1. Los libros contables: de inventario y balance, libro diario combinado y libro mayor.
2. Los libros sociales: registro de asociados, actas de las asambleas, actas de los cuerpos directivos y asistencia a las asambleas.

Parágrafo. El IPACOOOP establecerá mecanismos de fiscalización adicionales y podrá autorizar, previamente, el uso de sistemas, programas computacionales, o mecanismos o instrumentación de registros, datos y consignación de inventarios y asientos contables, siempre que, a su juicio, garanticen la inalterabilidad de su contenido para la fiscalización y determinación del aporte cooperativo.

Artículo 126. Las asociaciones cooperativas deberán presentar anualmente sus estados financieros al IPACOOOP, dentro de los noventa días siguientes al cierre del ejercicio económico.

Artículo 127. En casos especiales, cuando en determinadas cooperativas se presenten dificultades sobre la aplicación estricta de las disposiciones de esta Ley o de sus reglamentos, debido a sus reducidos capitales y falta de asesoría técnica adecuada, por la ubicación alejada de los principales centros urbanos, el IPACOOOP podrá autorizar un sistema más sencillo de contabilidad y de rendición de cuentas, previo estudio y comprobación de las circunstancias expuestas.

Artículo 128. Cuando la revisión de los estados financieros requiera la comprobación en documentos originales adicionales, o se necesite llevar a efecto la revisión, en forma directa, en los libros y comprobantes de contabilidad de las asociaciones cooperativas, el IPACOOOP ordenará lo pertinente para el adecuado cumplimiento de los requisitos.

Artículo 129. Las nomenclaturas de cuentas y el sistema general contable de las cooperativas, deben aplicarse según las normas establecidas por el IPACOOOP, previo acuerdo con las cooperativas o federaciones.

Artículo 130. Cuando la asociación cooperativa tenga dos o más actividades, deberá cumplir con los requisitos propios de cada una, además de:

1. Controlar por separado cada actividad, a fin de determinar la situación y rendimiento de cada una.
2. Establecer, asignar, supervisar y controlar la política de implementación y ejecución.

Artículo 131. Las cooperativas estarán obligadas a conservar sus libros de contabilidad en forma permanente, y el restó de su documentación contable por un período no menor de cinco años. Si pasado este período, la documentación no ha sido auditada, deberá

conservarse hasta que se audite y, como resultado, se determine qué documentación debe permanecer en custodia.

Artículo 132. Todas las cooperativas y demás organismos cooperativos estarán obligados a remitir al IPACOOOP, dentro de los treinta días siguientes a su elección, los nombres de las personas elegidas para integrar los cuerpos directivos.

CAPÍTULO IV

Régimen de Sanciones

Artículo 133. Las cooperativas, los miembros de los cuerpos directivos, el interventor y los liquidadores, serán responsables por los actos u misiones que implique el incumplimiento de las normas legales y estatutarias, y se harán acreedores a las sanciones que se determinen, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones.

Artículo 134. A los terceros igualmente responsables, se les aplicarán las sanciones previstas en la Ley, por el uso indebido de la denominación cooperativa, cooperativo, o de las abreviaturas coop o coo, o por actos que impliquen aprovechamiento de derechos y exenciones concedidos a las cooperativas.

Artículo 135. Las sanciones aplicables por el IPACOOOP por violaciones contempladas en esta Ley, seguirán el orden de prelación siguiente:

1. Amonestación escrita.
2. Imposición de multa hasta de mil balboas (B/. 1,000.00).
3. Orden de disolución y liquidación de la cooperativa, con la correspondiente cancelación de la personalidad jurídica.

Artículo 136. Para la aplicación de las sanciones a que se refiere el artículo anterior, con excepción de la que establece el numeral 1, será necesaria la investigación previa. En todo caso, las entidades o personas inculpadas deberán tener la oportunidad de presentar su descargo, ante autoridad competente.

Artículo 137. Las resoluciones de la dirección ejecutiva del IPACOOOP, serán susceptibles de recurso de reconsideración ante el mismo funcionario, y de apelación ante la junta directiva de esa institución. La actuación administrativa se cumplirá con sujeción, en todo caso, a las normas generales previstas sobre la materia.

TÍTULO IV

Disposiciones Finales Transitorias

Artículo 138. Las normas administrativas sobre cooperativas, vigentes hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, subsistirán, en todo cuanto no le sean contrarias, mientras se dicte el respectivo reglamento.

Artículo 139. Los casos no previstos en esta Ley y su reglamento, se resolverán de conformidad con el derecho cooperativo, el estatuto respectivo, la doctrina, los principios del cooperativismo y, en su defecto, de acuerdo con las regulaciones del derecho común que, por su naturaleza y similitud, puedan aplicarse a las cooperativas.

Artículo 140. Las asociaciones cooperativas deberán ajustar sus estatutos, estructuras y funcionamiento, a las disposiciones de la presente Ley, dentro de un plazo de doce meses, contado a partir de su promulgación.

Artículo 141. Esta Ley modifica el Decreto 31 de 1981, deroga la Ley 38 de 1980 así como toda disposición que le sea contraria y entrará en vigencia a partir de su promulgación.

ANEXO

CAPÍTULO III

Cooperativas Juveniles

Artículo 19. Las Cooperativas Juveniles se regirán por las disposiciones del presente reglamento. Su promoción se hará por vía del IPACOOOP, en estrecha colaboración con las federaciones.

Artículo 20. El IPACOOOP autorizará el funcionamiento de las Cooperativas Juveniles, las inscribirá en un registro especial y otorgará el permiso de operación de acuerdo al cumplimiento de los requisitos enumerados a continuación:

- a) Contar con un mínimo de veinte (20) asociados.
- b) Los asociados deben ser jóvenes, de buena reputación y laboriosidad y pagar su cuota de ingreso.
- c) Tener la aceptación de los padres, el tutor o quien ejerza la patria potestad de los asociados.
- ch) Haber recibido la orientación técnica del IPACOOOP.

Artículo 21. Las Cooperativas Juveniles para obtener la correspondiente autorización de funcionamiento deberán presentar al IPACOOOP la siguiente documentación:

- a) Solicitud de permiso de operación, firmado por la Comisión de Apoyo.
- b) Acta de formación de los consejos, Comités y la Comisión de Apoyo.
- c) Original y cuatro (4) copias del Estatuto aprobado por Asamblea General.

Artículo 22. Las cooperativas Juveniles se constituirán únicamente con jóvenes no menores de diez (10) años y no mayores de dieciocho (18) años. Si así lo estableciese el estatuto, se prorrogará la permanencia como asociado por el término adicional de dos (2) años a aquellos jóvenes que hubiesen cumplido los dieciocho (18) años de edad.

Artículo 23. Las Cooperativas Juveniles se clasificarán en dos (2) tipos:

- a) COOPERATIVAS ESCOLARES: las cuales funcionarán dentro de los planteles escolares de primaria y secundaria y cuyo vínculo común es ser alumno del mismo plantel.
- b) COOPERATIVAS COMUNALES: éstas funcionarán a nivel de las comunidades con jóvenes que sean o no estudiantes. En este tipo de cooperativas el vínculos común es la comunidad.

Artículo 24. Las Cooperativas Juveniles servirán como complemento a la educación escolar y familiar y tendrán los siguientes objetivos:

- a) Promover el espíritu cooperativista y ayuda mutua.
- b) Promover una verdadera conciencia social.
- c) Introducir un concepto humano y crear sensibilidad en la realización de sus actividades.
- ch) Promover la educación y la cultura y colaborar en todas las actividades que se organicen en la comunidad para tales efectos.
- d) Fomentar la cooperación para lograr el mejoramiento de los servicios de producción, consumo y ahorro existentes en el área a fin de contribuir a solucionar los problemas, familiares y comunales.

e) Contribuir a la consolidación de una firme conciencia cooperativa que posibilite la posterior integración de sus asociados al Movimiento Cooperativo.

Artículo 25: Las Cooperativas Juveniles se crearán para atender las necesidades de los jóvenes y, a tal fin, podrán desarrollar pequeñas empresas de producción y consumo tales como: proyectos agrícolas y pecuarios, tiendas escolares, kiosko comunal, artesanía y cualquier otra actividad apta para los jóvenes cooperativistas.

Artículo 26: Las Cooperativas Juveniles son de existencia ilimitada, sin perjuicio de los casos de disolución establecidos por la Ley 38 de 22 de octubre de 1980.

Artículo 27: Los Estatutos de las Cooperativas Juveniles deberán contener:

- a) Denominación, domicilio y objetivos de la Cooperativa Juvenil que se constituye.
- b) Condiciones de admisión y re-tiro de los asociados; derechos y obligaciones de los mismos.
- c) Valor nominal de las aportaciones sociales.
- ch) Convocatoria, facultades de las Asambleas y condiciones para la validez de sus resoluciones.
- d) Número de miembros que compondrán el Consejo de Administración y el de Vigilancia. Procedimiento para su elección, duración en el cargo, atribuciones, obligaciones y derechos según el cargo que desempeñen.
- e) Fechas de inicio y cierre del ejercicio social.
- f) Procedimiento para la liquidación de la Cooperativa.
- g) Todas las demás condiciones que establece la Ley sobre asociaciones cooperativas y que se juzguen necesarias para el buen funcionamiento de la Cooperativa Juvenil.

Artículo 28: El Capital Social se constituye por las aportaciones de los asociados, los intereses y excedentes que se resuelven capitalizar, los subsidios, donaciones, legados y reservas. El fondo de reservas y el fondo destinado para educación son irrepartibles, esto significa que los asociados no tienen derecho a recibir parte alguna de estos bienes. Los Certificados de Aportación serán todos de igual valor y serán pagados con dinero en efectivo o en servicios prestados a la cooperativa según lo disponga el estatuto.

Artículo 29. Las Cooperativas Juveniles deberán llevar los siguientes libros:

- a) Actas de la Asamblea General.
- b) Asistencia a las Asambleas Generales.
- c) Actas de Consejos y Comités.
- ch) Actas de Registro de Socios.
- d) Registros Contables.

Artículo 30: La Dirección, Administración y Vigilancia Interna de las Cooperativas Juveniles estarán a cargo de:

- a) Asamblea General.
- b) Consejo de Administración.
- d) Consejo de Vigilancia.
- ch) Comité de Educación.
- d) Otros Comités nombrados por la Asamblea.

Artículo 31. Las Cooperativas Juveniles tendrán, además, una Comisión de Apoyo compuesta por cinco (5) miembros escogidos, en reunión previa a su constitución formal,

entre los padres de los asociados, maestros, profesores y directivos de cooperativas de adultos.

Artículo 32. La Comisión de Apoyo tendrá la representación legal de la Cooperativa, y orientará a la misma en la toma de decisiones.

Artículo 33. Las Cooperativas Juveniles podrán formar uniones provinciales de Cooperativas, que tendrán por finalidad promover su vinculación y realizar operaciones en común.

4.27. PARAGUAY

LEY DE COOPERATIVAS

LEY N° 438/94

(del 21 de octubre de 1994)

CAPITULO I

De las Disposiciones Generales

Artículo 1

Finalidad de la Ley

La presente ley tiene por finalidad regular la constitución, organización y funcionamiento de las cooperativas y del sector cooperativo.

Artículo 2

Autonomía

La libre organización y la autonomía de las cooperativas, consagradas en la Constitución Nacional, quedan garantizadas por esta ley y las disposiciones legales que en su consecuencia se dicten.

Artículo 3

Naturaleza

Cooperativa es la asociación voluntaria de personas, que se asocian sobre la base del esfuerzo propio y la ayuda mutua, para organizar una empresa económica y social sin fines de lucro, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas.

Artículo 4

Principios

La constitución, organización y funcionamiento de las cooperativas deben observar los siguientes principios:

- a) Adhesión y retiro voluntario de socios;
- b) Gobierno democrático y autogestionario en igualdad de derechos y obligaciones de los socios;
- c) Limitación de interés al capital aportado por los socios, si se reconoce alguno;
- d) Distribución no lucrativa del excedente, y en proporción directa a la utilización de los servicios, o de acuerdo con la participación de los socios en los trabajos emprendidos en común;
- e) Neutralidad en materia de política partidaria y movimentista, religión, raza y nacionalidad;
- f) Fomento de la educación cooperativa; y,
- g) Participación en la integración cooperativa.

Artículo 5

Caracteres

La cooperativa debe reunir los siguientes caracteres:

- a) Número de socios variable e ilimitado, pero no inferior a veinte;
- b) Plazo de duración indefinido;
- c) Capital variable e ilimitado;
- d) Reconocimiento de un voto a cada socio, independientemente de su capital; y,
- e) Irrepartibilidad de las reservas sociales.

Artículo 6

Personalidad Jurídica

Las cooperativas, luego de su reconocimiento por el Instituto Nacional de Cooperativismo, tienen la calidad de personas jurídicas privadas de interés social. La personalidad jurídica es independiente de la persona de sus socios.

Artículo 7

Régimen Legal Aplicable

Las cooperativas y demás entidades reguladas en esta ley, se regirán por sus disposiciones y, en general, por el Derecho Cooperativo. Subsidiariamente se les aplicarán las normas del Derecho Común en cuanto fueran compatibles con su naturaleza.

Artículo 8

Acto Cooperativo

El acto cooperativo es la actividad solidaria, de ayuda mutua y sin fines de lucro de personas que se asocian para satisfacer necesidades comunes o fomentar el desarrollo.

El primer acto cooperativo es la Asamblea Fundacional y la aprobación del Estatuto.

Son también actos cooperativos los realizados por:

- a) Las cooperativas con sus socios;
- b) Las cooperativas entre sí; y,
- c) Las cooperativas con terceros en cumplimiento de su objeto social. En este caso se reputa acto mixto, y sólo será acto cooperativo respecto de la cooperativa.

Los actos cooperativos quedan sometidos a esta ley y subsidiariamente al Derecho Común. Las relaciones entre las cooperativas y sus empleados y obreros se rigen por la Legislación Laboral. En las cooperativas de trabajo los socios no tienen **relación de** dependencia laboral.

Artículo 9

De acuerdo con sus fines y objetivos las cooperativas pueden realizar actividades específicas, o en forma múltiple.

Artículo 10

A los efectos legales y tributarios, la propiedad cooperativa será coincidente en relación al número de socios.

Artículo 11

Actividades

Las cooperativas pueden realizar toda clase de actividades en igualdad de condiciones con las personas de derecho privado.

Artículo 12

Denominación

La denominación social debe incluir la locución cooperativa con el agregado de la palabra limitada o su abreviatura para informar su responsabilidad patrimonial. Debe indicar la naturaleza de su actividad principal. No se admitirá que las cooperativas adopten denominaciones idénticas o similares a las ya registradas que pudiera dar lugar a confusión. No se podrá usar la denominación de «Cooperativa» para encubrir actividades mercantiles ajenas a la economía de servicio sin fines de lucro.

Artículo 13

Prohibición de Transformación

Las cooperativas no pueden transformarse en entidades de otra naturaleza jurídica, y es nula toda disposición en contrario.

CAPITULO II

De la Construcción y el Reconocimiento

Artículo 14

Asamblea de Constitución

La constitución de la cooperativa se realizará en asamblea convocada por el comité organizador, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- a) Elección de presidente y secretario de asamblea;
- b) Lectura y consideración del informe del comité organizador;
- c) Lectura y consideración del proyecto de estatuto social;
- d) Suscripción e integración de certificados de aportación; y,
- e) Elección de los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de **Vigilancia**.

Artículo 15

Formalidad

Las cooperativas se constituirán mediante instrumento privado, debiendo existir constancia de haberse notificado del acto al Instituto Nacional de Cooperativismo, como condición para la autenticidad del mismo. Las firmas de los socios fundadores serán certificadas por el representante de la Autoridad de Aplicación y, en su ausencia, por el Presidente de la Asamblea o por Escribano Público.

Artículo 16

Contenido del Estatuto Social

El estatuto social debe contener, cuanto menos:

- a) La denominación social y el dominio real;
- b) El objeto social;
- c) Las condiciones para la admisión, suspensión, exclusión, expulsión y retiro de socios;
- d) Los deberes y derechos de los socios;
- e) La forma de constituir el capital y de aumentarlo, así como el valor de los certificados de aportación, las aportaciones mínimas por socio y su forma de integración;
- f) La organización y funciones de la asamblea, consejo de administración y Junta de Vigilancia;
- g) Las normas para la distribución del excedente o de enjugamiento de pérdidas, así como para la creación de fondos de reserva y las relativas al reintegro del capital a quienes dejan de ser socios;
- h) Las disposiciones sobre integración cooperativa; e,
- i) El procedimiento para la reforma de estatuto, fusión, disolución y liquidación.

Artículo 17

Solicitud de Reconocimiento Legal

La solicitud de reconocimiento de la personería jurídica se presentará a la Autoridad de Aplicación acompañada de los siguientes recaudos:

- a) El ejemplar original del acta de la asamblea de constitución y dos copias;
- b) Tres ejemplares del estatuto social firmados por el presidente y secretario del Consejo de Administración;
- c) Dos ejemplares de la Nómina de Socios Fundadores, con mención del nombre y apellido, nacionalidad, estado civil, profesión, edad, domicilio real, monto del capital suscrito y del integrado, número de cédula de identidad y firma de cada uno;
- d) La boleta original del certificado de depósito en un Banco Oficial equivalente al 5% (cinco por ciento) del capital suscrito en dinero; y,
- e) Dos copias de las actas de sesiones del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia, donde conste la distribución de cargos.

Artículo 18

Constitución Legal

Si los recaudos presentados se ajustan al artículo anterior, o una vez subsanados los inconvenientes observados por la Autoridad de Aplicación, ésta dictará la resolución de reconocimiento de la personería jurídica y procederá a inscribir a la recurrente en el Registro de Cooperativas a su cargo, con lo cual se satisface el requisito de publicidad. Las cooperativas se reputarán legalmente constituidas una vez inscritas en el mencionado Registro.

Artículo 19

Certificado de Inscripción

Dispuesta la inscripción de la cooperativa, la Autoridad de Aplicación entregará a los interesados una copia del estatuto social y del acta de constitución debidamente visados, y un certificado en el que conste:

- a) La denominación social;
- b) Número de inscripción en el Registro de Cooperativas;
- c) El objeto social;
- d) La nómina de los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia;
- e) El monto inicial del capital suscrito e integrado; y,
- f) El domicilio real de la cooperativa.

Artículo 20

Cooperativa en Formación Los actos celebrados y los instrumentos suscritos a nombre de la cooperativa antes de su constitución legal, hacen solidariamente responsables a quienes los realicen. Se exceptúan los actos necesarios para obtener la inscripción en el Registro de Cooperativas. La responsabilidad solidaria cesará en la primera asamblea que se lleve a cabo con posterioridad a la inscripción si los actos no fueron objetados.

Artículo 21

Inscripción de Reformas del Estatuto Cualquier reforma del estatuto se tramitará bajo el mismo procedimiento establecido para la inscripción de la cooperativa. La reforma estará en vigencia a partir de su inscripción en el Registro de Cooperativas.

Artículo 22

Precooperativas

Se reconoce a las precooperativas existentes como entidades de bien común, sin fines de lucro. La Autoridad de Aplicación brindará a las mismas el apoyo necesario para su buen

funcionamiento. Hasta tanto mantenga la modalidad de precooperativas, se registrarán por las disposiciones del Código Civil que regulan las entidades del bien público sin fines de lucro.

Artículo 23

Cooperativas Extranjeras

Las cooperativas constituidas en el extranjero, podrán operar en el territorio nacional, toda vez que se hallen legalmente reconocidas en su país de origen y observen los principios cooperativos establecidos en esta ley. La inscripción en el Registro de Cooperativas se hará sobre la base de reciprocidad con el país de origen. Se admite la constitución de cooperativas binacionales o multinacionales, en el marco de la integración cooperativa.

CAPITULO III

De los socios

Artículo 24

Requisitos para ser socio

Para ser socio de una cooperativa, se requiere:

- a) Haber cumplido dieciocho años de edad;
- b) Suscribir la cantidad de certificados de aportación establecida en el estatuto social, e integrar en el momento del ingreso el diez por ciento como mínimo; y,
- c) Satisfacer los demás requisitos contenidos en el estatuto social.

Artículo 25

Personas Jurídicas

Las personas jurídicas pueden ser socias de una cooperativa a condición de que no persigan fines de lucro y fueran de interés social. Estos requisitos serán calificados en cada caso por la Autoridad de Aplicación. Los municipios, las gobernaciones y demás entidades del sector público podrán asociarse a las cooperativas.

Artículo 26

Formalización del Ingreso

La calidad de socio se adquiere mediante la participación en la asamblea de constitución, o por resolución del Consejo de Administración a petición del interesado. El ingreso es libre, pero podrá estar supeditado a las condiciones derivadas del objeto social, sin distingo de ninguna clase.

Artículo 27

Responsabilidad Patrimonial

La responsabilidad patrimonial del socio para con la cooperativa y terceros se limita al monto de su capital suscrito.

Artículo 28

Deberes

Sin perjuicio de los demás que se establecen en esta ley y en el estatuto social, los socios tienen los siguientes deberes:

- a) Cumplir sus obligaciones societarias y económicas;
- b) Desempeñar los cargos para los que fueren electos;
- c) Respetar y cumplir el estatuto y reglamentos, resoluciones asamblearias y del Consejo de Administración; y,
- d) Abstenerse de realizar actos que comprometan la estabilidad patrimonial de la cooperativa o socaven los vínculos de solidaridad entre los socios.

Artículo 29

Derechos

Además de los establecidos en esta ley y en el estatuto social, los socios tienen los siguientes derechos:

- a) Utilizar los servicios sociales en las condiciones reguladas en el estatuto social;
- b) Participar con voz y voto en las asambleas;
- c) Ser electos para desempeñar cargos en el Consejo de Administración, Junta de Vigilancia o comités auxiliares;
- d) Solicitar información al Consejo de Administración o a la Junta de Vigilancia sobre la marcha de la cooperativa; y,
- e) Formular denuncias ante la Junta de Vigilancia por incumplimiento de la Ley, el estatuto social o los reglamentos. De no ser atendidas satisfactoriamente, podrán recurrir a la Autoridad de Aplicación.

Artículo 30

Pérdida de la Calidad de socio

La calidad de socio se pierde por:

- a) Fallecimiento de la persona física o disolución de la persona jurídica;
- b) Renuncia presentada al Consejo de Administración y aceptada por éste;
- c) Sentencia ejecutoriada por delitos cometidos contra el patrimonio de la cooperativa;
- d) Exclusión; y,
- e) Expulsión.

Artículo 31

Exclusión

La medida de exclusión no implica sanción disciplinaria, y el Consejo de Administración la adoptará cuando el socio:

- a) Perdió algún requisito indispensable para seguir teniendo la calidad de tal, conforme con las condiciones estatutarias; y,
- b) Dejó de operar con su cooperativa por el tiempo fijado en el estatuto social o tenga un atraso mayor al plazo previsto en él para la integración del certificado de aportación.

En cualquiera de los casos el órgano competente deberá notificar al afectado a fin de intimarle la regulación en el plazo de treinta días bajo advertencia de exclusión. La medida podrá ser recurrida por el afectado conforme al siguiente artículo.

Artículo 32

Suspensión y Expulsión

Los socios pueden ser suspendidos o expulsados por las causales previstas en el estatuto social. El Consejo de Administración no podrá aplicar tales sanciones sin previa comprobación de la falta en sumario en el que se dé participación al afectado. Contra las sanciones aplicadas podrán interponerse los recursos de reconsideración y de apelación ante la asamblea. Mientras la sanción no se confirme, los socios mantienen tal carácter. El estatuto regulará el procedimiento para adoptar las medidas de suspensión-o-expulsión.

Artículo 33

Liquidación de Cuenta

En todos los casos de pérdida de la calidad de socio, se liquidará su cuenta particular, para lo cual se incluirá a favor del cesante el capital integrado, los intereses y retornos

aún no pagados que le correspondan, y se debitarán las obligaciones a su cargo, así como la fracción proporcional de las pérdidas posibles a la fecha de la cesación.

El saldo resultante de la liquidación, si lo hubiere, será pagado al socio o a sus herederos en las condiciones y plazos establecidos en el estatuto social. Si el socio resulta deudor, la cooperativa exigirá su pago conforme a la ley.

Artículo 34

Monto del Reintegro

Cualquiera fuera la causa de retiro, el socio sólo tiene derecho al reintegro del valor nominal de su capital integrado, sin perjuicio de la capitalización del revalúo de activos fijos, si fuere el caso. Mientras no se efectivice el reintegro, el capital seguirá devengando interés de acuerdo con la resolución de la asamblea que distribuya el excedente del ejercicio en cuyo transcurso se produjo la cesación.

Artículo 35

Inembargabilidad del Capital

El capital integrado por los socios es inembargable, salvo el caso de cobro judicial de las obligaciones del socio con la cooperativa previsto en el artículo 48.

Los demás acreedores de los socios sólo pueden solicitar el embargo de los excedentes que anualmente correspondan al socio demandado.

CAPITULO IV

Del Régimen Patrimonial

Artículo 36

Constitución del Patrimonio

El patrimonio de la cooperativa se constituye, con:

- a) Los aportes integrados por los socios;
- b) Las reservas y fondos especiales; y,
- c) Las donaciones, legados, subsidios y recursos análogos que reciba.

Artículo 37

Bonos de Inversión

Las cooperativas y centrales de cooperativas podrán emitir bonos de inversión con fines de financiamientos productivos.

Artículo 38

Certificados de Aportación

El capital de los socios estará representado por los certificados de aportación. Estos serán nominativos, indivisibles, iguales e inalterables en su valor, y transferibles sólo entre socios con autorización del Consejo de Administración. La no autorización será recurrible ante la Asamblea General. No podrán circular en los mercados de valores y solamente la cooperativa puede reintegrar su importe al titular.

Artículo 39

Integración del Capital

La integración del capital podrá hacerse en dinero u otros bienes y servicios. Cuando el aporte consista en bienes que no fueran dinero, la valuación correrá por cuenta del Consejo de Administración, el que los aceptará toda vez que sean necesarios y útiles para el cumplimiento del objeto social. Si fueran servicios, el referido órgano admitirá aquellos que imprescindiblemente necesite la cooperativa. Los bienes que se aporten en concepto

de capital antes del reconocimiento legal, serán transferidos a nombre de la cooperativa en un plazo no mayor de treinta días, a contar de la fecha-del-reconocimiento.

Artículo 40

Interés sobre el Capital

Siempre que se registren excedentes, el estatuto social puede contemplar el pago de interés sobre el capital integrado, que será siempre limitado. Si el socio adeuda parte del valor del capital suscrito, los intereses y retornos que le correspondan, se aplicarán al pago del saldo de capital pendiente de integración.

Artículo 41

Excedente

Del total de ingresos devengados obtenidos por la gestión económica del ejercicio se deducirán los costos y gastos de explotación. El saldo favorable que resulte se denomina excedente que se distribuirá en la forma prevista en el artículo siguiente.

Artículo 42

Distribución del Excedente

El excedente realizado y líquido se distribuirá de la siguiente manera:

- a) Diez por ciento como mínimo, para reserva legal, hasta alcanzar, cuanto menos, el veinte y cinco por ciento del capital integrado de la cooperativa;
- b) Diez por ciento como mínimo para el Fondo de Fomento de la Educación Cooperativa;
- c) Otros fondos específicos que señale el estatuto social o que resuelve la asamblea para fines determinados;
- d) Pago de un interés mínimo a los certificados de aportación. La tasa de interés no podrá exceder al promedio ponderado de las tasas pasivas abonadas por el sistema bancario y financiero nacional para los depósitos a plazo;
- e) El remanente que quede, se distribuirá entre los socios en proporción a los trabajos y las operaciones realizadas con la cooperativa; y,
- f) Tres por ciento en concepto de aporte para el sostenimiento de las Confederaciones o Federaciones a que esté asociada la respectiva cooperativa.

Artículo 43

Enjugamiento de Pérdida

La pérdida resultante de la gestión económica del ejercicio, si la hubiere, podrá ser cubierta con:

- a) La Reserva Legal;
- b) Fondos destinados a dicha finalidad;
- c) Excedentes de futuros ejercicios; y,
- d) El capital de los socios en proporción directa al monto del mismo.

Artículo 44

Irrepartibilidad de Reservas y Fondos

La reserva legal, los fondos previstos en esta Ley, así como los que contemple el estatuto social y los que crearen las asambleas, no pertenecen a los socios, al igual que las donaciones, legados, subsidios y recursos análogos recibidos por la cooperativa. En consecuencia, no tienen derecho a su restitución proporcional los herederos de los socios, ni los cesantes.

Artículo 45

Capitalización de Retornos e Intereses

Por resolución de la mayoría de los socios presentes en la asamblea, los retornos e intereses sobre el capital podrán ser capitalizados, entregando a los socios certificados de aportación en la proporción que les correspondan.

Artículo 46

Destino de Excedentes Especiales

Los excedentes provenientes de operaciones con terceros realizadas conforme con esta ley y su reglamentación, al igual que los no generados por la diferencia entre costo y precio de los servicios, serán destinados al fondo de Fomento de la Educación Cooperativa. La prestación de servicios a terceros no podrá realizarse en condiciones más favorables que a los socios y no se benefician de las exenciones tributarias reguladas más adelante.

Artículo 47

Descuento de salarios

Las entidades públicas y privadas están obligadas a deducir de los salarios, jubilaciones o pensiones, los montos que por escrito autoricen los interesados para el pago de préstamos, sus intereses y otros conceptos adeudados a su Cooperativa.

Artículo 48

Cobro Compulsivo

Para el cobro por la vía judicial de las obligaciones contraídas por el socio con la cooperativa, será suficiente título ejecutivo el estado de cuenta debidamente notificado al socio moroso y visado por la autoridad de Aplicación.

Artículo 49

Régimen Contable

El ejercicio económico será anual y cerrará en la fecha que fije el estatuto social conforme a sus respectivas actividades. La contabilidad será llevada con arreglo a las normas de contabilidad universalmente aceptadas. La Autoridad de Aplicación debe elaborar planes de cuentas con la nomenclatura cooperativa.

Artículo 50

Revalúo del Activo Fijo

El revalúo del activo fijo se efectuará conforme a las disposiciones legales que establece el Ministerio de Hacienda, al cierre de cada ejercicio. Por decisión de la Asamblea el incremento por revalúo puede destinarse a una cuenta «Reserva de Revalúo» o capitalización, en cuyo caso se entregarán a los socios certificados de aportación.

CAPITULO V

De los Órganos de Gobierno

Artículo 51

Órganos

La dirección, administración y vigilancia de la cooperativa están a cargo de la asamblea, el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y demás órganos que establezca el estatuto.

SECCION I

De la Asamblea

Artículo 52

Naturaleza de la Asamblea y Clases

La asamblea es la autoridad máxima de la cooperativa. Sus decisiones adoptadas conforme a esta ley, su reglamento, el estatuto social y otras disposiciones reglamentarias, obligan a los demás órganos y a los socios presentes o ausentes. Puede ser ordinaria o extraordinaria.

Artículo 53

Asamblea Ordinaria

La asamblea ordinaria deberá:

- a) Llevarse a cabo dentro de los ciento veinte días siguientes a la fecha de cierre del ejercicio económico; y,
- b) Ocuparse específicamente de la consideración de los siguientes temas:
 1. Memoria del Consejo de Administración, balance general, cuadro de resultados, dictamen e informe de la Junta de Vigilancia;
 2. Distribución del excedente o enjugamiento de la pérdida;
 3. Plan general de trabajos y presupuesto de gastos, inversiones y recursos para el siguiente ejercicio;
 4. Elección de miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia; y,
 5. Otros reservados a las asambleas en general.

Artículo 54

Asamblea Extraordinaria

La asamblea extraordinaria puede llevarse a cabo en cualquier momento a fin de tratar asuntos de su competencia, otros previstos en esta Ley para las asambleas en general, los que considere de su interés societario y en caso de acefalía el previsto en el inciso 4) del artículo anterior. Es privativo de la asamblea extraordinaria considerar los siguientes temas:

- a) Modificación del estatuto social;
- b) Fusión o incorporación a otras cooperativas;
- c) Emisión de bonos de inversión;
- d) Disolución de la cooperativa; y,
- e) Elección de autoridades, en caso de acefalía.

Artículo 55

Convocación

La asamblea ordinaria será convocada por el Consejo de Administración a iniciativa propia o por la Junta de Vigilancia cuando aquel omita hacerlo en el plazo legal. La Autoridad de Aplicación, a solicitud de cualquier socio, podrá convocarla cuando los órganos mencionados no lo hicieren.

La asamblea extraordinaria podrá ser convocada por el Consejo de Administración a pedido de la Junta de Vigilancia o del veinte por ciento de los socios, siempre que el total de socios de la cooperativa no fuera mayor de cuatrocientos. De superar esta cifra, el estatuto social podrá fijar un porcentaje inferior.

Si el Consejo de Administración no respondiera en el plazo de veinte días o denegare el pedido hecho por la Junta de Vigilancia, ésta podrá convocar directamente a asamblea extraordinaria. La Autoridad de Aplicación, a solicitud del porcentaje de socios señalado, podrá llamar a asamblea toda vez que el pedido no fuera tramitado regularmente por los órganos citados, y previa audiencia de las autoridades de la cooperativa.

Artículo 56

Plazo y Forma de la Convocatoria

La convocatoria a asamblea se realizará con una antelación mínima de veinte días respecto de la fecha marcada para su realización. El estatuto social determinará el procedimiento que con certeza justifique la máxima difusión de la convocatoria.

En todos los casos la convocatoria se dará a conocer con quince días de anticipación cuanto menos, en relación a la fecha prevista para la asamblea y con expresa mención de los puntos del orden del día. En las asambleas extraordinarias son nulas las deliberaciones sobre temas ajenos al orden del día.

Artículo 57

Competencia de las Asambleas en general

Sin perjuicio de las establecidas en esta ley y en el estatuto, es competencia exclusiva de la asamblea:

- a) Fijar la política general de la cooperativa;
- b) Aprobar y modificar los reglamentos que le correspondan;
- c) Suspender o remover a los miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia; d) Fijar la remuneración de los miembros de los órganos cuya designación realiza;
- e) Afiliación o desafiliación a Centrales, Federaciones y Confederaciones de cooperativas;
- f) Resolver la emisión de obligaciones de carácter general; g) Decidir acción de responsabilidad contra los miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, previa instrucción de sumario en el que se garantice a los imputados el derecho a la defensa; y,
- h) Disponer todo tipo de investigación, auditoria, formación de comisiones especiales con facultades necesarias para cumplir sus objetivos.

Artículo 58

Quórum

La asamblea sesionará válidamente con la presencia de más de la mitad de los socios que estén habilitados a la fecha de la respectiva convocatoria.

El estatuto social debe regular el procedimiento a seguir en el caso en que a la hora indicada en la convocatoria no se reune tal cantidad.

Artículo 59

Adopción de Resoluciones

Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría de votos de los socios presentes, salvo aquellas cuestiones para las que se requiera mayoría calificada. La elección de autoridades para los órganos que establece la ley, podrá hacerse mediante votación nominal o por listas. Si la votación es por listas de candidatos, la integración de los cuerpos directivos será proporcional, de acuerdo al método fijado en el Código Electoral.

Artículo 60

Cuarto Intermedio e Impugnación

La asamblea puede ser declarada en cuarto intermedio por una sola vez, y deberá proseguir dentro de los treinta días posteriores. Las resoluciones de asamblea pueden ser impugnadas dentro de los treinta días siguientes a su realización, y deberán ser tramitadas ante el Instituto Nacional de Cooperativismo. La resolución que dicte este organismo podrá recurrirse dentro de los treinta días posteriores a la notificación, ante el Juzgado de Primera Instancia en los Civil y Comercial de Turno.

Artículo 61

Votación Prohibida

Cuando la votación tenga por objeto la aprobación o rechazo de las gestiones del Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia, los miembros de tales órganos no podrán votar. Los socios que fueran empleados u obreros de la Cooperativa no podrán votar en las decisiones en los cuales se traten directa o indirectamente temas laborales.

Artículo 62

Contralor

Es de competencia de las Asambleas tener el contralor de la labor desarrollada por el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia y disponerla apertura de Sumarios Administrativos cuando se presuman irregularidades, en resguardo del interés general, aprobar sanciones y remitir conclusiones, cuando correspondan, a la Justicia Ordinaria. Podrán también constituir comisiones investigadores dotándole de facultades para el cumplimiento de su cometido.

SECCION II

Del Consejo de Administración

Artículo 63

Naturaleza y Facultades

El Consejo de Administración es el órgano encargado de la administración permanente de la cooperativa y su representante legal. Sin perjuicio de las establecidas en esta ley, sus atribuciones serán determinadas en el estatuto social. Se consideran facultades implícitas de este órgano las que la ley o el estatuto no reserve expresamente a la asamblea, y las que resulten necesarias para el cumplimiento el objeto social.

Artículo 64

Composición y Elección

El Consejo de Administración se compondrá de un número impar de miembros, no inferior a tres, determinado por el estatuto social. Los miembros titulares y suplentes serán socios electos en asamblea en la forma y por el período de mandato establecido en el estatuto. Los suplentes reemplazarán a los titulares en caso de renuncia, remoción, ausencia o fallecimiento y serán llamados por el Consejo de Administración para ocupar el cargo.

Artículo 65

Remoción

La asamblea puede remover en cualquier tiempo a los miembros del Consejo de Administración, toda vez que el tema figure en el orden del día o fuera consecuencia directa de asunto incluido en él. Consumada la remoción, en el mismo acto se elegirán a los reemplazantes, salvo que el estatuto social contemple procedimiento especial.

Artículo 66

Reglas de Funcionamiento

El estatuto debe fijar las reglas de funcionamiento del Consejo de Administración. Las actas de las sesiones deben ser firmadas por los asistentes. El quórum se da con la presencia de más de la mitad de los miembros titulares.

Artículo 67

Responsabilidad

Los miembros del Consejo de Administración responden personal y solidariamente para con la cooperativa y terceros por violación de la ley, el estatuto social y reglamentos, así como por la inejecución o mal desempeño del mandato que ejercen. Se exime el miembro que no haya participado en la sesión que adoptó la resolución, o haya dejado constancia

en acta de su voto en contra. La responsabilidad se extiende a los miembros de la Junta de Vigilancia por los actos u omisiones que no hubiesen objetado oportunamente.

Artículo 68

Comité Ejecutivo

A los efectos de atender la gestión ordinaria de la cooperativa, el estatuto social o el reglamento puede organizar un comité ejecutivo integrado por miembros titulares del Consejo de Administración, quienes podrán ser remunerados. Este comité no altera los deberes y las responsabilidades de los demás miembros del Consejo de Administración.

Artículo 69

Comités auxiliares

El Consejo de Administración podrá designar de su seno o de entre los socios, los comités auxiliares que sean necesarios y, obligatoriamente, integrará el comité de educación y de crédito dentro de los treinta días 2 posteriores a su elección.

Artículo 70

Compensación

Por resolución de asamblea, los integrantes del Consejo de Administración y comités auxiliares, pueden ser compensados con dieta, viático, bonificación o gratificación.

Artículo 71

Gerentes

El Consejo de Administración puede nombrar uno o más gerentes para la ejecución de sus decisiones y atención de los negocios ordinarios de la cooperativa, quienes estarán subordinados a él. La gestión de gerentes no altera la responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración.

Artículo 72

Impedimentos para ser directivo

No podrán ser designados miembros del Consejo de Administración:

- a) Las personas unidas por parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad con otro miembro del Consejo;
- b) Los incapaces de hecho de absolutos y relativos;
- c) Los que actúen en empresas de competencia o con intereses opuestos; y,
- d) Los quebrados culpables o fraudulentos; los fallidos por quiebra causal hasta cinco años posteriores a su rehabilitación; los inhabilitados judicialmente para ocupar cargos públicos; los condenados por delitos contra el patrimonio y contra la fe pública; y los condenados.

Artículo 73

Impugnaciones

Las decisiones del Consejo de Administración son recurribles por los socios conforme con el procedimiento que marque el estatuto social, hasta agotar en asamblea el ámbito interno. Posterior a ésta, quedará expedita la vía para la aplicación del artículo 60.

SECCION II

De la Junta de Vigilancia

Artículo 74

Naturaleza de la Junta de Vigilancia

La Junta de Vigilancia es el órgano encargado de controlar las actividades económicas y sociales de la cooperativa.

Artículo 75

Alcance de sus Funciones

Ejercerá sus funciones de acuerdo a lo dispuesto en la ley, el estatuto y resoluciones asamblearias, cuidando de no entorpecer el normal desenvolvimiento de los otros órganos de la cooperativa. Debe dejar constancia escrita de sus observaciones o requerimientos y, previo pedido al Consejo de Administración, puede convocar a asamblea en la forma establecida en esta ley.

Artículo 76

Funciones Específicas

Sin perjuicio de las demás señaladas en esta ley y en el estatuto social, la Junta de Vigilancia debe:

- a) Fiscalizar la dirección y administración de la cooperativa, a cuyo efecto sus miembros pueden asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones del Consejo de Administración. Esta fiscalización se cumplirá en forma ilimitada y permanente sobre las operaciones sociales, pero sin intervenir en la gestión administrativa;
- b) Examinar los libros y documentos cuando juzgue conveniente y, por lo menos, una vez cada tres meses;
- c) Verificar en igual forma a la señalada en el inciso precedente las disponibilidades y títulos valores, así como las obligaciones y modo en que son cumplidas;
- d) Presentar a la asamblea ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la cooperativa, dictaminando sobre la memoria, inventario, balance y cuadro de resultados;
- e) Suministrar a los socios que lo requieran información sobre las materias que son de su competencia;
- f) Hacer incluir en el orden del día de la asamblea los puntos que considere procedentes dentro del plazo previsto en el estatuto social;
- g) Vigilar que los órganos sociales acaten debidamente las leyes, estatuto, reglamentos y decisiones de las asambleas; y,
- h) Investigar las denuncias que los socios le formulen por escrito, mencionarlas en sus informes a la asamblea y expresar acerca de ellas las consideraciones y proposiciones que correspondan.

Artículo 77

Aplicación de Otras Normas

Rigen para la Junta de Vigilancia las disposiciones sobre composición y elección, remoción, reglas de funcionamiento, responsabilidad, compensación e impedimentos fijados para el Consejo de Administración. La incompatibilidad por parentesco se extienden al vínculo existente entre miembros de la Junta de Vigilancia y el Consejo de Administración.

Artículo 78

Asociación entre Cooperativas

Las cooperativas podrán asociarse entre sí para cambiar servicios, celebrar contratos de participación, complementar actividades, cumplir en forma más adecuada el objeto social y, en fin, para llevar a cabo el principio de integración cooperativa.

Artículo 79

Fusión

Dos o más cooperativas podrán fusionarse a los efectos de alcanzar con mayor eficacia sus objetivos sociales. Las cooperativas fusionadas se disuelven sin liquidar su patrimonio pero se extingue la personería jurídica. La nueva cooperativa emergente de la fusión, subroga de pleno derecho a las que le dieron origen en todos sus derechos, acciones y obligaciones.

Artículo 80

Incorporación

Habrà incorporación cuando una cooperativa absorbe a otra u otras conservando la incorporante su personería jurídica y extinguiéndose la de las incorporadas. Aquella igualmente subroga en los derechos, acciones y obligaciones a las incorporadas.

Artículo 81

Trámites

Para la fusión o incorporación, las interesadas elaborarán un plan de operaciones que una vez aprobado por la Autoridad de Aplicación será sometido a las asambleas extraordinarias de las afectadas. Aprobada la fusión o incorporación, se solicitará la inscripción respectiva en el Registro de Cooperativas.

Artículo 82

Socios Disconformes

Los socios disconformes con la fusión o incorporación, deben hacer constar sus disidencias en el acta de la asamblea pertinente, a fin de dar nacimiento al derecho de reintegro de los certificados de aportación, intereses y retornos pendientes. El estatuto social preverá la situación de los socios ausentes.

SECCION IV

De la Integración Vertical

Parágrafo I

De las Centrales Cooperativas

Artículo 83

Constitución y Objeto Social

Tres o más cooperativas pueden concretar la constitución de centrales cooperativas departamentales, regionales o a nivel nacional, de segundo grado, que sin llegar a la fusión económica, se integren para la gestión más eficaz de sus servicios comunes.

Artículo 84

Funciones

Las Centrales Cooperativas tendrán las siguientes funciones:

- a) Organizar servicios comunes de administración cooperativa y el aprovechamiento mutuo de tales servicios;
- b) Promover o emprender por cuenta propia la producción de bienes o prestación de servicios y organizar el adecuado mercadeo de los mismos;
- c) Gestionar la adquisición en las condiciones más ventajosas posibles de los bienes y servicios requeridos por las cooperativas asociadas;
- d) Gestionar servicios de financiamiento de las operaciones y de asesoramiento que demande sus asociadas; y,
- e) Realizar otras actividades en beneficio común.

Las funciones enumeradas son simplemente enunciativas.

Artículo 85

Contenido del Estatuto Social

Además de las prescripciones contenidas en esta ley, el estatuto social de las centrales establecerá la esfera y los límites dentro de los cuales desarrollarán su gestión, los órganos que la componen, la forma de sufragar los gastos que demande su sostenimiento y el procedimiento de adopción de sus decisiones.

Artículo 86

Autonomía de las Afiliadas

En ningún caso las centrales sustituirán a las autoridades de las cooperativas asociadas, en las materias que específicamente le confieren a éstas sus respectivos Estatutos Sociales.

Artículo 87

Reconocimiento Legal

Para la existencia legal de las centrales, será menester la homologación del acuerdo de constitución por la Autoridad de Aplicación.

Parágrafo II

De las Federaciones Cooperativas

Artículo 88

Constitución

Siete o más cooperativas del mismo ramo pueden organizarse en cooperativas de segundo grado con el nombre de Federación de Cooperativas, relacionada a la actividad o sector económico que abarquen.

Artículo 89

Objeto Social

Las federaciones tendrán por objeto:

- a) Defender a sus federadas y coordinar la acción de las mismas;
- b) Prestar y contratar asistencia técnica y asesoramiento y realizar gestiones tendientes a lograr mejores rendimientos en las actividades que desarrollan las cooperativas;
- c) Fomentar la investigación científica aplicada a las actividades cumplidas por las cooperativas federadas y promover la educación especializada de los socios de éstas;
- d) Difundir los principios y prácticas del cooperativismo; y,
- e) Conciliar las diferencias que pudieran suscitarse entre las cooperativas federadas y cuando les soliciten, arbitrar sus disputas internas.

Artículo 90

Aplicación de Normas

Las federaciones serán dirigidas y administradas por un Consejo de Administración y fiscalizadas por una Junta de Vigilancia integrados en la forma que establezcan sus Estatutos. Les serán de aplicación las normas anteriores de esta ley, en cuanto fueren pertinentes a su organización y funcionamiento.

Artículo 91

Representación y Voto

Las centrales y federaciones podrán establecer un régimen de representación y voto proporcional al número de socios de las cooperativas asociadas. En este caso el estatuto social debe fijar un mínimo que asegure la participación de todas y un máximo que impida el predominio excluyente de algunas.

Parágrafo III

De la Confederación de Cooperativas

Artículo 92

Constitución y Objeto Social

Las centrales cooperativas y las federaciones cooperativas en número no menor de ocho, podrán constituir entidades de tercer grado denominadas Confederación de Cooperativas con carácter puramente gremial, a los efectos de:

- a) Ejercer la representación de sus organismos asociados en el país y en el exterior;
- b) Ejecutar funciones de fomento, coordinación y defensa de los intereses generales del cooperativismo y del sector cooperativo;
- c) Realizar funciones de interrelación cooperativa a nivel internacional;
- d) Coordinar la acción de sus organismos asociados con la acción gubernamental del Sector Público;
- e) Proponer al Estado las medidas necesarias y convenientes para el desarrollo cooperativo, así como para el perfeccionamiento del derecho cooperativo;
- f) Fomentar el proceso de permanente integración de las cooperativas;
- g) Promover intensiva y permanentemente la educación cooperativa en todos los niveles del Movimiento Cooperativo y en los demás sectores;
- h) Defender la vigencia de los principios del cooperativismo y de las bases doctrinarias reconocidas o aceptadas por el sector cooperativo;
- i) Responder a las consultas que le formulen las autoridades nacionales en torno de medidas vinculadas al cooperativismo; y,
- j) Representar a sus organismos asociados en los organismos e instituciones en que se recabe tal representación;

Artículo 93

Delegados en las Asambleas

En las asambleas de Confederación, las organizaciones de segundo grado componentes deberán estar representadas por la cantidad de delegados que los Estatutos de la Confederación respectiva determine.

Artículo 94

Aplicación de Normas

Para la Confederación de Cooperativas rigen las normas relativas a las centrales y federaciones en cuanto fueran compatibles con su naturaleza.

CAPITULO VII

De la Disolución y Liquidación

Artículo 95

Causas de Disolución

Las cooperativas se disuelven por alguna de las siguientes causas:

- a) Resolución de Asamblea;
- b) Fusión o incorporación a otras cooperativas;
- c) Disminución del número de socios o asociadas a una cantidad inferior a la establecida en esta ley;
- d) Declaración en quiebra;
- e) Cancelación de la personería jurídica; y,
- f) Otras causales establecidas en disposiciones legales aplicables en razón de la actividad que realicen.

Artículo 96

Efectos de la Disolución

Salvo los casos de fusión o incorporación, se procederá inmediatamente a liquidar el patrimonio. A este solo efecto la cooperativa conservará su personalidad jurídica. Los responsables de la liquidación deberán informar a la Autoridad de Aplicación a fin de inscribir en el Registro de Cooperativas.

Artículo 97

Órgano Liquidador

La liquidación en principio estará a cargo de una comisión liquidadora integrada por tres socios de la cooperativa disuelta, nombrados en asamblea, a quienes se sumará un representante de la Autoridad de Aplicación, para lo cual se elevará la solicitud respectiva acompañada del acta de asamblea que acordó la disolución. En caso de imposibilidad de realización de la asamblea, la comisión liquidadora será integrada por la Autoridad de Aplicación en la cantidad establecida. Si no fuera posible conformar la comisión con socios de la cooperativa disuelta, la misma se integrará con dos representantes de la Autoridad de Aplicación y dos representantes designados directamente por la Confederación de Cooperativas a la que está asociada.

Artículo 98

Funciones de la Comisión Liquidadora

La comisión liquidadora funcionará inmediatamente después de su designación, debiendo someter a la Autoridad de Aplicación un plan de trabajos que consulte la mayor eficiencia y el menor costo. Este plan, en cuanto fuera posible, será previamente aprobado por la asamblea. Una vez en funciones la comisión liquidadora, cesan los órganos de la cooperativa. Los liquidadores ejercen la representación de la Cooperativa y tienen el deber de realizar el activo y cancelar el pasivo, actuando con la denominación social y el aditamento «en liquidación».

Artículo 99

Distribución del Remanente

Realizado el activo y cancelado el pasivo, el remanente se distribuirá en el siguiente orden:

- a) Remuneración a los liquidadores, que no será superior al cinco por ciento del saldo;
- b) Reintegro a los socios del valor nominal de los certificados de aportación. Sino es posible el reintegro total, se prorrateará en función del capital individual; y,
- c) El saldo tendrá el destino que fije su Estatuto Social.

CAPITULO VIII

De las clases de Cooperativas

Artículo 100

Clasificación

En razón de la naturaleza de sus actividades, las cooperativas podrán ser especializadas y multiactivas.

Artículo 101

Cooperativas Especializadas

Las cooperativas especializadas son las que se constituyen para satisfacer una necesidad específica correspondiente a una sola rama de la actividad económica, social o cultural.

Artículo 102

Cooperativas Multiactivas

Las cooperativas multiactivas son las que se constituyen para satisfacer varias necesidades. Los servicios deberán ser organizados en departamentos independientes de acuerdo con las características de cada tipo especializado de cooperativa.

SECCION UNICA

De los Bancos y Seguros Cooperativos e intermediación financiera

Artículo 103

Bancos Cooperativos

Queda autorizada la formación de Bancos Cooperativos, cuya capitalización se hará por certificados de aportación de las Cooperativas, Centrales y Socios individuales. Los mismos serán de inversión y fomento, pudiendo realizar todas las operaciones activas y pasivas para el fomento y desarrollo de la economía cooperativa, en igualdad de condiciones con los demás Bancos. La adhesión al Banco es voluntaria. Le serán de aplicación las disposiciones de la Ley Orgánica del Banco Central del Paraguay y la Ley General de Bancos y otras Entidades Financieras.

Asimismo, queda autorizada la formación de Bancos de Cooperativas en carácter de Bancos de segundo piso.

Artículo 104

Cooperativas de Seguros

Las cooperativas de seguros tienen por objeto realizar servicios de seguros contractuales propios de las empresas aseguradoras y se rigen por esta ley y por las disposiciones de la Ley General de Seguros en todo lo que fuera pertinente.

Artículo 105

Otras Cooperativas

Con el mismo alcance de las disposiciones contenidas en esta Sección, se podrán constituir cooperativas administradoras de fondos previsionales y otras que realicen actividades regidas por leyes especiales.

CAPITULO IX

De la Educación Cooperativa

Artículo 106

Prioridad de la Educación

La educación cooperativa entre los socios es una prioridad en los objetivos de la cooperativa. Es obligación del Consejo de Administración dar cumplimiento a este postulado.

Artículo 107

Evaluación Anual

La asamblea ordinaria evaluará el grado de desarrollo de la educación cooperativa y su influencia para mejorar la formación moral y espiritual de los socios y de la comunidad, a cuyo efecto la Junta de Vigilancia presentará su dictamen sobre los logros en este campo.

Artículo 108

Extensión de la Educación

Las cooperativas desarrollarán labores educativas de extensión social en las comunidades de su radio de acción, y darán preferente atención a la difusión de la doctrina y los principios en los centros de enseñanza formales e informales de todo nivel.

CAPITULO X

De las relaciones con el Estado

Artículo 109

Obligación del Estado

Las cooperativas son entidades de interés social, necesarias para el desarrollo económico y social del país. El Estado fomentará su difusión y protegerá su funcionamiento.

SECCION I

De la Enseñanza del Cooperativismo

Artículo 110

Incorporación en los Programas de Estudio

El Ministerio de Educación y Culto, en coordinación con la Autoridad de Aplicación y el Sector Cooperativo, deberá elaborar los programas curriculares de nivel primario y secundario que incorporen progresivamente la enseñanza y la práctica del cooperativismo. Podrá crear centros regionales de formación de docentes, dirigentes y técnicos en cooperativismo.

Artículo 111

Cooperación Interinstitucional

La Autoridad de Aplicación y las entidades del sector cooperativo cooperarán estrechamente con el Ministerio de Educación y Culto, las universidades y demás organismos afines, en la formulación de planes, programas de enseñanzas, provisión de material didáctico y edición de textos especializados.

SECCION II

De las Medidas de Fomento del Cooperativismo

Artículo 112

Medidas de Fomento

El fomento estatal del cooperativismo se realizará por medio de la asistencia técnica, crediticia y exenciones tributarias legisladas más adelante.

Artículo 113

Exenciones Tributarias

Cualquiera fuera la clase o grado de la cooperativa, queda exenta de los siguientes tributos:

- a) Todo impuesto que grave su constitución, reconocimiento y registro, incluyendo los actos de transferencia de bienes en concepto de capital;
- b) El Impuesto a los Actos y Documentos que graven los actos de los socios con su cooperativa;
- c) El Impuesto al Valor Agregado que grave los actos de los socios con su cooperativa, con exclusión de las adquisiciones y enajenaciones realizadas por la cooperativa con terceros;
- d) El Impuesto a la renta sobre los excedentes de las entidades cooperativas que se destinen al cumplimiento de lo dispuesto en los literales a), b) y f) del artículo 42 y sobre los excedentes de las entidades cooperativas que sean créditos de los socios por sumas pagadas de más o cobradas de menos originadas en prestaciones de servicios o de bienes del socio con su cooperativa o de ésta con aquél; y,
- e) Aranceles aduaneros, adicionales y recargos por la importación de bienes de capital destinados al cumplimiento del objeto social, los que no podrán ser transferidos sino después de cinco años de ingresados al país.

Artículo 114

Exenciones

El Ministerio de Hacienda otorgará las exenciones establecidas en el artículo anterior en trámite sumario en un plazo no mayor de doce días hábiles perentorios, transcurrido el cual sin resolución se reputará aceptada la solicitud.

SECCION III

De la Autoridad de Aplicación

Artículo 115

Organismo

La Autoridad de Aplicación de la legislación cooperativa es el Instituto Nacional de Cooperativismo.

Artículo 116

Naturaleza del Instituto

El Instituto Nacional de Cooperativismo funciona como organismo especializado del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Su ámbito de actuación es nacional.

Artículo 117

Funciones

El Instituto Nacional de Cooperativismo tiene las siguientes funciones:

- a) Autorizar el funcionamiento de las cooperativas, llevando el registro correspondiente y rubricar los libros exigidos por las reglamentaciones;
- b) Ejercer la fiscalización de las cooperativas en cumplimiento de la presente ley y de los estatutos sociales de las mismas sin perjuicio de las funciones de Ministerio de Hacienda en materia tributaria;
- c) Asistir y asesorar técnicamente a las cooperativas y a las instituciones públicas y privadas en general en los aspectos económico, social, jurídico, educativo, organizativo, financiero y contable vinculados con la materia de su competencia;
- d) Coordinar las labores que desarrollen los demás organismos del Estado en el sector cooperativo, formulando planes y programas tendientes al fortalecimiento y difusión de las cooperativas;
- e) Organizar un servicio estadístico y de información del desarrollo cooperativo;
- f) Elaborar los proyectos de reglamentación relativos a los distintos tipos de cooperativas;
- g) Elaborar el proyecto de reglamentación de la presente ley;
- h) Dictar resoluciones con arreglo a la ley y el reglamento;
- i) Confeccionar modelos de estatutos sociales de las cooperativas en función de las actividades y tipos, así como los formularios que faciliten su constitución;
- j) Promover el perfeccionamiento de la legislación cooperativa;
- k) Realizar investigaciones y estudios sobre la realidad cooperativa nacional, así como sobre la doctrina y prácticas cooperativas publicando textos y materiales alusivos;
- l) Establecer en los departamentos del país filiales o agencias; y,
- m) Las demás que establece esta ley.

Artículo 118

Fiscalización Pública

El Instituto Nacional de Cooperativismo ejercerá la fiscalización de acuerdo con las siguientes atribuciones:

- a) Solicitar documentación y realizar inspecciones cuando estime convenientes;
- b) Asistir a las asambleas en calidad de veedor, cuando considere necesario;
- c) Coordinar su labor con otros organismos de fiscalización del sector público;

- d) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias de la materia cooperativa; y,
- e) Las demás que establece esta ley.

Artículo 119

Apoyo a Sectores Menos Desarrollados

El Instituto Nacional de Cooperativismo debe prestar apoyo técnico a los sectores menos desarrollados del Movimiento Cooperativo, considerando prioritariamente las limitaciones socioeconómicas de los socios, las necesidades de la región a que responden los proyectos cooperativos así como la gravitación sectorial de éstos.

Artículo 120

Dirección y Administración

El Instituto Nacional de Cooperativismo será dirigido por un Director designado por el Poder Ejecutivo que será asistido por un Consejo Asesor.

Artículo 121

Integración del Consejo Asesor

El Consejo Asesor se compondrá de cinco miembros, cuatro de ellos designados por las Cooperativas reconocida en Asamblea integrada por un representante por cada Cooperativa y un representante del Ministerio de Educación y Culto designado por el Poder Ejecutivo.

Artículo 122

El Consejo Asesor será convocado por el Director del Instituto Nacional de Cooperativismo para el tratamiento de todos aquellos asuntos por su trascendencia requieran su opinión y en especial en relación a:

- a) Proyectos de reforma;
- b) Determinación de planes de acción generales, regionales o sectoriales; y,
- c) Coordinación de actividades.

Artículo 123

Consejo Consultivo

El Instituto Nacional de Cooperativismo podrá contar con un consejo consultivo ad honorem en el que estarán representados los ministerios y otros organismos oficiales que entienden en las actividades que realicen las cooperativas, así como las organizaciones más representativas del movimiento cooperativo de conformidad con la reglamentación respectiva. Será convocado para el tratamiento de todos aquellos asuntos que por su trascendencia requieren su opinión, y en especial:

- a) Proyectos de reforma del régimen legal de las cooperativas;
- b) Determinación de planes de acción generales, regionales o sectoriales; y,
- c) Coordinación de actividades entre los organismos del sector público ejecutores de programas de acción que directamente afecten a las cooperativas.

SECCION IV

Del Régimen de Sanciones

Artículo 124

Causales de Sanción

Las cooperativas serán sancionadas en los siguientes casos:

- a) Sino dieren cumplimiento a las disposiciones establecidas por esta ley o por sus reglamentos; y,
- b) Si infringieren las resoluciones dictadas por la Autoridad de Aplicación.

Artículo 125

Sanciones Aplicables

De comprobarse los casos previstos en el artículo precedente, las cooperativas podrán ser sancionadas con:

- a) Apercibimiento;
- b) Multa que no será excesiva ni mayor a 200 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas en la capital;
- c) Intervención; y,
- d) Cancelación de la personería.

Las sanciones se graduarán teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, los antecedentes de la imputada, su importancia social o económica y en su caso, los perjuicios causados.

Artículo 126

Instrucción de Sumario

Las cooperativas no pueden ser sancionadas sino por las causas establecidas en esta sección y previa instrucción de sumario, procedimiento en el que tendrán oportunidad de conocer la imputación, realizar los descargos, ofrecer pruebas y alegar sobre la producida.

Artículo 127

Causa de Intervención

Si después de aplicada una multa en su escala máxima subsistiere la infracción sancionada, o se reincidiere en ella, la Autoridad de Aplicación requerirá al Consejo de Administración y a la Junta de Vigilancia de la cooperativa, que regularicen la situación dentro de un plazo perentorio, bajo advertencia de intervención.

La intervención será dispuesta por la Autoridad de Aplicación observando el siguiente procedimiento:

- a) Dispuesta la intervención por la Autoridad de Aplicación, ésta nombrará un interventor quien podrá convocar a Asamblea Extraordinaria, a fin de regularizar el funcionamiento de la cooperativa y elegir nuevas autoridades en su caso;
- b) La intervención cesará en cualquier momento cuando quede definitivamente regularizado el funcionamiento de la cooperativa.
- c) La intervención tendrá una duración máxima de noventa días, prorrogables por única vez por otros noventa días más, según las circunstancias;
- d) Durante la intervención todos los actos de los órganos de la cooperativa deberán ser previamente autorizados por el interventor, quien al término de su gestión rendirá un informe documentado a la Autoridad de Aplicación; y,
- e) La intervención podrá ordenar auditorias.

Artículo 128

Cancelación de Personería

Vencidos los plazos establecidos en el inc. d) del artículo anterior sin que se regularice el funcionamiento de la cooperativa, la Autoridad de Aplicación cancelará la personería jurídica de la afectada.

Artículo 129

Recursos

Las sanciones pueden ser recurridas administrativa y judicialmente de conformidad a las leyes que rigen la materia.

CAPITULO XI

De las Disposiciones Finales

Artículo 130

El presupuesto y el personal de la actual Dirección General de Cooperativismo pasa a formar parte del Instituto Nacional de Cooperativismo. El personal conservará de pleno derecho, su antigüedad y beneficios sociales respectivos.

Artículo 131

Disposiciones Derogadas

Deróganse la Ley Núm. 349 del 12 de enero de 1972, las disposiciones sobre régimen tributario a las Cooperativas que establece la Ley Núm. 125/91 y demás disposiciones legales que se opongan a esta Ley.

Artículo 132

Comuníquense al Poder Ejecutivo

4.28. PERU

LEY GENERAL DE COOPERATIVAS - DECRETO SUPREMO 074/90-TR

TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY GENERAL DE COOPERATIVAS CON LAS MODIFICACIONES DISPUESTAS POR DECRETOS LEGISLATIVOS Nos. 141 y 592

TITULO I

GENERALIDADES

Artículo 1

Declárase de necesidad nacional y utilidad pública, la promoción y la protección del Cooperativismo, como un sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia y a la realización de la justicia social.

Artículo 2

El Estado garantiza el libre desarrollo del Cooperativismo y la autonomía de las organizaciones cooperativas.

Artículo 3

Toda organización cooperativa debe constituirse sin propósito de lucro, y procurará, mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua de sus miembros, el servicio inmediato de éstos y el mediato de la comunidad.

Artículo 4

Toda organización cooperativa adquirirá la calidad de persona jurídica, desde su inscripción en los Registros Públicos, sin necesidad de resolución administrativa previa de reconocimiento oficial y quedará obligada, en todo caso, al estricto cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley.

Artículo 5

Toda cooperativa tiene, el deber de:

1. Observar los siguientes principios Cooperativos:

- 1.1 Libre adhesión y retiro voluntario;
- 1.2 Control democrático;
- 1.3 Limitación del interés máximo que pudiera reconocerse a las aportaciones de los socios;
- 1.4 Distribución de los excedentes en función de la participación de los socios en el trabajo común o en proporción a sus operaciones con la cooperativa;
- 1.5 Fomento de la educación cooperativa;
- 1.6 Participación en el proceso de permanente integración;
- 1.7 Irrepartibilidad de la Reserva Cooperativa;
2. Cumplir las siguientes normas básicas:
 - 2.1 Mantener estricta neutralidad religiosa y política partidaria;
 - 2.2 Reconocer la igualdad de derechos y obligaciones de todos los socios, sin discriminación alguna;
 - 2.3 Reconocer a todos los socios el derecho de un voto por persona, independientemente de la cuantía de las aportaciones;
 - 2.4 Tener duración indefinida;
 - 2.5 Estar integrada por un número variable de socios y tener capital variable e ilimitado, no menores a los mínimos que, de acuerdo con su tipo o grado, le corresponda según el Reglamento;

Artículo 6

Ninguna organización cooperativa podrá:

1. Establecer pactos con terceros para permitirles participar directa o indirectamente de la prerrogativas o beneficios que la ley otorga a las organizaciones cooperativas;
2. Pertenecer a entidades de fines incompatibles con los del Sector Cooperativo;
3. Conceder ventajas, preferencias u otros privilegios, a sus promotores, fundadores o dirigentes;
4. Realizar actividades diferentes a las previstas en su estatuto;
5. Efectuar operaciones económicas que tengan finalidad exclusivista o de monopolio;
6. Integrar sus asambleas, consejos o comités con personas que no sean miembros de la propia organización cooperativa, ni con trabajadores de ésta, salvo lo dispuesto por los Artículos 7 inciso 1.1), 8 (inciso 4) y 65 (inciso 3), de la presente Ley;

Artículo 7

Las cooperativas primarias se organizarán con sujeción a las siguientes reglas:

1. Por su Estructura Social: toda cooperativa se constituirá y funcionará necesariamente en una de las siguientes modalidades:
 - 1.1 Cooperativas de Trabajadores: cuyo objeto es ser fuente de trabajo para quiénes al mismo tiempo sean sus socios y trabajadores;
 - 1.2 Cooperativas de Usuarios: cuyo objeto es ser fuente de servicios para quienes sean o puedan ser los usuarios de éstas;
2. Por su Actividad Económica: toda cooperativa deberá adecuarse a cualquiera de los Tipos previstos a continuación o de los que fueren posteriormente reconocidos según el Artículo siguiente (inciso 8);
 - 2.1 Cooperativas agrarias;
 - 2.2 Cooperativas agrarias azucareras;
 - 2.3 Cooperativas agrarias cafetaleras;
 - 2.4 Cooperativas agrarias de colonización;
 - 2.5 Cooperativas comunales;
 - 2.6 Cooperativas pesqueras;
 - 2.7 Cooperativas artesanales;

- 2.8 Cooperativas industriales;
- 2.9 Cooperativas mineras;
- 2.10 Cooperativas de transportes;
- 2.11 Cooperativas de ahorro y crédito;
- 2.12 Cooperativas de consumo;
- 2.13 Cooperativas de vivienda;
- 2.14 Cooperativas de servicios educacionales;
- 2.15 Cooperativas de escolares;
- 2.16 Cooperativas de servicios públicos;
- 2.17 Cooperativas de servicios múltiples;
- 2.18 Cooperativas de producción especiales;
- 2.19 Cooperativas de servicios especiales;

Artículo 8

Para la aplicación del Artículo anterior rigen las siguientes normas:

1. El Reglamento podrá determinar los tipos de cooperativas que por excepción y por su finalidad de interés social, pueden ser constituidas sólo por usuarios;
2. Tiene la calidad de cooperativa cerrada; la que, por disposición expresa de su estatuto, admita como socios únicamente a personas que reúnan determinadas calidades ocupacionales, laborales o profesionales, u otras condiciones especiales comunes a todas ellas, como requisitos esenciales para su inscripción y permanencia en su seno;
3. Tienen la calidad de cooperativas abiertas; las demás no comprendidas en el inciso anterior;
4. Todos los trabajadores de una cooperativa de trabajadores deben ser necesariamente socios de ésta y viceversa, salvo la excepción prevista en el Artículo siguiente (inciso 1.2)
5. Pertenecerán al tipo de cooperativas agrarias a que se refiere el inciso 2.1 del Artículo anterior las cooperativas agrarias de especialidades diferentes a las comprendidas en los inciso 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 de dicha disposición;
6. Tendrán la calidad de cooperativa comunal, con facultad de realizar servicios múltiples, la que se constituye únicamente por miembros de una misma comunidad campesina o nativa;
7. La cooperativa de servicios múltiples debe constituirse y funcionar necesariamente como cooperativa cerrada salvo los casos que por excepción y por razones de interés público, autorice el Reglamento;
8. Tendrán la calidad de cooperativas de producción especiales; o de cooperativas de servicios especiales, la que se propongan realizar actividades de producción o de servicios, respectivamente, diferentes a los de las cooperativas comprendidas en los demás tipos;
9. La cooperativa podrá realizar actividades propias de cooperativas de otros tipos empresariales, a condición de que sean sólo accesorios o complementarias de su objetivo social y estén autorizadas por el estatuto o la asamblea general;
10. Cuando lo justifiquen las necesidades del Sector Cooperativo, el Instituto Nacional de Cooperativas podrá reconocer, mediante Resolución de su Consejo Directivo, nuevos tipos de cooperativas diferentes a los previstos en el inciso 2 del Artículo anterior o derivados de ellos;
11. El Reglamento precisará los fines, campo de acción, organización, número mínimo de socios, funcionamiento, otras características diferenciales de cada tipo de cooperativa y demás aspectos de la Tipología Cooperativa

Artículo 9

Las relaciones de trabajo en las organizaciones cooperativas regulan por las siguientes normas básicas:

1. Tienen la calidad jurídica de trabajadores dependientes y en consecuencia están sujetos al régimen laboral de la actividad privada, para todos sus efectos:

1.1 Los trabajadores de las cooperativas de usuarios.

1.2 Los trabajadores no socios de las cooperativas de trabajadores que fueren excepcionalmente contratados por éstas;

1.3 Los trabajadores de las organizaciones cooperativas de grado superior;

2. El Poder Ejecutivo establecerá, mediante Reglamento especial, el régimen laboral correspondiente a las cooperativas de trabajadores y, dentro de dicha norma, los beneficios, que deberán ser reconocidos a favor de los socios-trabajadores de ellas, así como los procedimientos administrativo y jurisdiccional aplicables a las respectivas reclamaciones o demandas laborales.

Artículo 10

Las personas naturales o jurídicas no comprendidas en esta Ley están absolutamente prohibidas de usar la denominación cooperativa y/o el símbolo o emblema del cooperativismo, u otros similares o derivados de éstos, en sus nombres, denominaciones, lemas, marcas, títulos, documentación, material publicitario, o en cualquier otra forma que pudiese confundirlas con entidades del Sector Cooperativo. Quedan exceptuadas de la prohibición precedente los servicios cooperativos de participación y finalidad exclusivamente estatales, así como los que se establezcan por convenios gubernamentales e internacionales. El símbolo o emblema del Cooperativismo será diseñado por la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú y aprobado por el Instituto Nacional de Cooperativas.

TITULO II

ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL DE LAS ORGANIZACIONES COOPERATIVAS

CAPITULO I

Constitución e Inscripción

Artículo 11

Toda organización cooperativa se constituirá, sin perjuicio de las obligaciones sectoriales correspondientes a las cooperativas en función de sus actividades económicas, con observancia de las siguientes normas:

1. La constitución de la organización cooperativa será acordada por la asamblea general de función, en la cual se aprobará su estatuto, se suscribirá su capital inicial, si se tratare de cooperativa primaria o de central cooperativa, y se elegirá a los miembros de sus órganos directivos;

2. El acto jurídico de constitución constará en escritura pública, o en documento privado con firmas certificadas por notario, o, en defecto de éste, por juez de paz;

3. La denominación de la organización cooperativa expresará:

3.1. Cuando se trate de cooperativa primaria: la palabra cooperativa, seguida de la referencia a su tipo y del nombre distintivo que elija;

3.2. Cuando se trate de central cooperativa: la palabra central cooperativa; o central de cooperativas, seguidas de la referencia al tipo o tipos que le correspondan y del nombre distintivo que ella elija;

3.3. Cuando se trate de federación nacional: las palabras federación nacional de cooperativas, seguidas de la referencia a su tipo;

3.4. La Confederación Nacional de Cooperativas del Perú utilizará únicamente esta denominación;

4. Ninguna organización cooperativa podrá utilizar denominación idéntica a la de otra pre-existente;
5. Copia certificada del documento de constitución, con transcripción del estatuto, será remitida al gobierno regional que corresponda, bajo fe de notario o, en defecto de este, de juez de paz, para los efectos del inciso 1 del Artículo siguiente;
6. Los partes de la escritura de constitución, o las copias certificadas del documento en que ésta conste si fuere el caso, serán entregados al Registro de Personas Jurídicas en que deba inscribirse la organización cooperativa constituida, con la constancia de notario o juez de paz sobre el cumplimiento del inciso anterior, para los efectos de los incisos 1 a 6 del Artículo siguiente .

Artículo 12

Cumplido el Artículo anterior, la organización cooperativa constituida será inscrita con sujeción al siguiente procedimiento:

1. El gobierno regional que corresponda, podrá proponer observaciones o tachas contra la inscripción de la organización cooperativa, con especificación de sus fundamentos, cuando el acto de constitución y/o el estatuto de ella fueren contrarios a la presente Ley, dentro de los treinta días hábiles posteriores a la fecha de cumplimiento de la obligación prevista en el inciso 5 del Artículo anterior;
2. Vencido el término previsto en el inciso anterior y con las observaciones o tachas propuestas por el gobierno regional que corresponda, o sin ellas, el registrador inscribirá a la organización cooperativa, o suspenderá o negará la inscripción según los casos con arreglo a ley;
3. La organización cooperativa podrá operar válidamente sólo después de ser inscrita en el Registro de Personas Jurídicas;
4. Los actos y/o documentos que fueren celebrados o suscritos en nombre de una organización cooperativa no inscrita previamente en el Registro de Personas Jurídicas, obligarán exclusiva, personal y solidariamente a quienes lo celebraren o suscribieren, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar; inscrita la organización cooperativa, dichos actos quedarán convalidados si los ratifica el órgano cooperativo competente;
5. La organización cooperativa constituida con arreglo a la presente Ley y al Reglamento será inscrita en el Registro de Personas Jurídicas, de este modo:
 - 5.1. Las cooperativas: en el Libro de Cooperativas del Registro de Personas Jurídicas del Distrito Registral de su respectivo domicilio;
 - 5.2. La Confederación Nacional de Cooperativas y las Federaciones Nacionales de Cooperativas, sin perjuicio de su calidad de asociaciones; en el Libro de Cooperativas del Registro de Personas Jurídicas del Distrito Registral de Lima;
6. Toda organización cooperativa expresará en su correspondencia, además de su denominación y su domicilio, los datos correspondientes a su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas y, cuando se trate de cooperativa primaria la indicación de su calidad de cooperativa de trabajadores; o de cooperativa de usuarios;
7. La elección de los dirigentes, gerentes y demás mandatarios de toda organización cooperativa, así como la modificación o revocación de sus mandatos, surtirá efectos respecto de terceros sólo después de que las actas en que tales hechos consten sean inscritas en el Libro de Cooperativas de Registro de Personas Jurídicas; para el efecto de la inscripción será suficiente la presentación de copias certificadas notarialmente, o en su defecto por Juez de Paz;
8. El Registro de Personas Jurídicas remitirá al Instituto Nacional de Cooperativas, mensualmente y para fines estadísticos, la información correspondiente a las inscripciones relativas a organizaciones cooperativas, de conformidad con el Reglamento;

9. Cuando se constatare que actos inscribibles de la organización cooperativa, a pesar de haber quedado inscritos según el presente Artículo, contravinieren normas expresas de esta Ley, el Gobierno Regional que corresponda, le requerirá para que los adecue a ellas dentro del término no mayor de sesenta días y bajo apercibimiento de aplicarle las disposiciones de los Artículos 99 a 103 y 105 a la presente Ley.

Artículo 13

Cualquier reforma del estatuto de una organización cooperativa, aprobada por su asamblea o junta general, será tramitada con observancia de los Artículos 11 y 12 de la presente Ley, en cuanto fueren aplicables. Las reformas tendrán vigencia, para todos sus efectos, a partir de su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas.

Artículo 14

Toda cooperativa publicará los estados financieros anuales que según la ley deba presentar a la Administración Tributaria, Superintendencia de Banca y Seguros y a cualquier otro organismo del Sector Público, así como los de su disolución y liquidación cuando éstas ocurran, mediante el depósito de copias notarialmente certificadas de dichos documentos en el Registro de Personas Jurídicas que le corresponda, dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo legal para el cumplimiento de aquellas obligaciones. El depósito registral de los estados financieros, hecho con sujeción al párrafo anterior reemplaza a la obligación legal de publicarlos en diarios, cuando fuere el caso. El Reglamento señalará los requisitos y procedimientos correspondientes a la constitución, aprobación y reforma de los estatutos, inscripción y demás actos referentes a la estructura orgánica y funcional de las organizaciones cooperativas, así como los relativos al depósito registral regulado por el Artículo anterior y a la manifestación y expedición de copias de los documentos depositados.

Artículo 15

El Reglamento señalará los requisitos y procedimientos correspondientes a la constitución, aprobación y reforma de los estatutos, inscripción y demás actos referentes a la estructura orgánica y funcional de las organizaciones cooperativas, así como los relativos al depósito registral regulado por el Artículo anterior y a la manifestación y expedición de copias de los documentos depositados.

CAPITULO II SOCIOS

Artículo 16

Para ser socios de una organización cooperativa es necesario, según los casos y sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo siguiente:

1. Que las personas naturales tengan capacidad legal, salvo los casos de menores de edad, que, por excepción, autorice el Reglamento;
2. Que las personas jurídicas estén constituidas e inscritas con arreglo a ley y sean autorizadas por su estatuto, o por su órgano competente, para integrar la organización cooperativa;
3. Que, en todo caso, reúnan los demás requisitos exigidos por el estatuto.

Artículo 17

Podrán ser socios de las cooperativas:

1. Otras cooperativas, las comunidades campesinas o nativas, las entidades del Sector Público y otras personas jurídicas sin fines de lucro;

2. Las pequeñas empresas, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

2.1 Que no tengan más de diez trabajadores dependientes a su servicio; y

2.2 Que el valor contable de sus activos fijos no supere el equivalente de diez remuneraciones mínimas vitales, anuales de Lima por cada uno de dichos trabajadores;

3. Cuando se trate de cooperativas de usuarios los trabajadores de éstas no pueden ser socios de ellas; pero podrán hacer uso de todos los servicios de la cooperativa en igualdad de condiciones con los socios.

Artículo 18

Ninguna persona puede ejercer funciones de dirigente de más de una cooperativa primaria del mismo tipo.

Artículo 19

Los derechos y obligaciones de los socios o asociados serán establecidos por el estatuto, según la naturaleza y fines específicos de la respectiva organización cooperativa.

Artículo 20

La responsabilidad de los socios de una cooperativa está limitada al monto de sus aportaciones suscritas. Para las federaciones nacionales de cooperativas y la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú rigen las normas del Código Civil relativas a las asociaciones.

Artículo 21

La persona que adquiera la calidad de socio responderá con sus aportaciones, conjuntamente con los demás socios, de las obligaciones contraídas por la cooperativa, antes de su ingreso en ella y hasta la fecha de cierre del ejercicio dentro del cual renunciare, o cesare por otra causa.

Artículo 22

La inscripción de un socio será cancelada en los casos de renuncia, de exclusión por las causales que señale el estatuto de la organización cooperativa, de fallecimiento, o de disolución si fuere persona jurídica.

Artículo 23

El retiro voluntario del socio es un derecho. Podrá diferirse la aceptación de la renuncia cuando el renunciante tenga deudas exigibles a favor de la cooperativa, o cuando no lo permita la situación económica o financiera de ésta.

Artículo 24

Cancelada la inscripción de un socio, se liquidará su cuenta, a la que se acreditarán, según los casos, las aportaciones, los intereses y los excedentes aún no pagados que le correspondieren y se debitarán las obligaciones a su cargo y la parte proporcional de las pérdidas producidas a la fecha de cierre del ejercicio anual dentro del cual renunciare o cesare por otra causa.

El saldo neto resultante de la liquidación, si lo hubiere, será pagado al ex-socio o a sus herederos, en las condiciones y plazos previstos por el estatuto.

Si el ex-socio resultare deudor, la cooperativa ejercitará sus derechos con arreglo a ley; en tal caso, la liquidación del crédito de la cooperativa apareja ejecución contra el deudor.

CAPITULO III

Régimen Administrativo

Artículo 25

La dirección, administración y control de la cooperativa estará a cargo de la asamblea general, el consejo de administración y el consejo de vigilancia, respectivamente.

Determinadas funciones específicas podrán ser encomendadas a los comités que establezcan el Reglamento, o el estatuto de la cooperativa.

El Reglamento permitirá que, en las cooperativas que por su naturaleza puedan operar con muy reducido número de socios, las funciones de administración y vigilancia sean desempeñadas por órganos unipersonales.

Artículo 26

La asamblea o junta general es la autoridad suprema de la organización cooperativa. Sus acuerdos obligan a todos los socios presentes y ausentes, siempre que se hubieren tomado en conformidad con esta Ley y el estatuto.

Artículo 27

Compete a la asamblea general de la cooperativa:

1. Aprobar, reformar e interpretar el estatuto y el reglamento de elecciones en sesiones extraordinarias convocadas exclusivamente para tales fines;
2. Elegir y remover, por causa justificada, a los miembros de los consejos de administración y de vigilancia y del comité electoral;
3. Remover al consejo de vigilancia cuando declare improcedentes o infundados los motivos por los que este órgano la hubiere convocado en el caso previsto por Artículo 31 (inc. 16.2) de la presente Ley;
4. Fijar las dietas de los miembros de sus consejos, comités y/o comisiones por asistencia a sesiones, y/o las asignaciones para gastos de representación;
5. Examinar la gestión administrativa, financiera y económica de la cooperativa, sus estados financieros y los informes de los consejos;
6. Determinar el mínimo de aportaciones que deba suscribir un socio;
7. Autorizar a propuesta del Consejo de Administración:
 - 7.1. La distribución de los remanentes y excedentes;
 - 7.2. La emisión de obligaciones;
 - 7.3. El gravamen o enajenación de los bienes inmuebles, salvo disposición diferente del estatuto;
8. Pronunciarse sobre los objetivos generales de acción institucional, cuando lo proponga el consejo de administración;
9. Disponer investigaciones, auditorias y balances extraordinarios;
10. Resolver sobre las reclamaciones de los socios contra los actos de los consejos de administración y de vigilancia;
11. Resolver sobre las apelaciones de los socios que fueren excluidos en virtud de resoluciones del consejo de administración;
12. Imponer las sanciones de suspensión o destitución del cargo directivo, o de exclusión, según los casos, al dirigente que con su acción, omisión o voto hubiere contribuido a que la cooperativa resulte responsable de infracciones de la ley, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar;
13. Determinar, en casos de otras infracciones no previstas por el inciso anterior, la responsabilidad de los dirigentes, para ejercitar contra ellos las acciones que correspondan e imponerles las sanciones que estatutariamente fueren de su competencia;
14. Acordar la transformación de la cooperativa en otra de distinto tipo;

15. Acordar la fusión de la cooperativa, de conformidad con el Artículo 53 (inciso 5) de la presente ley;
16. Acordar la participación de la cooperativa, como socia de otras personas jurídicas no cooperativas;
17. Acordar la disolución voluntaria de la cooperativa;
18. Resolver los problemas no previstos por la ley ni el estatuto, de conformidad con el Artículo 116 de la presente;
19. Ejercer cualesquier otras atribuciones inherentes a las cooperativas que no fueren expresamente conferidas por el estatuto a otros órganos de ella;
20. Adoptar, en general, acuerdos sobre cualquier asunto importantes que afecten al interés de la cooperativa y ejercer las demás atribuciones de su competencia según la ley y el estatuto.

Artículo 28

En las cooperativas primarias con más de mil socios, las funciones de la asamblea general serán ejercidas por la asamblea general de delegados, constituida por delegados elegidos bajo la dirección inmediata y exclusiva del comité electoral, mediante sufragio personal, universal, obligatorio, directo y secreto. En las organizaciones cooperativas de grado superior, la autoridad suprema será la asamblea o junta general, constituida por los presidentes de las organizaciones cooperativas integrantes, salvo disposición diferente de los estatutos de éstas.

Artículo 29

En las asambleas, cualquiera sea su naturaleza, y en toda elección cooperativa, no se admitirán votos por poder, salvo los casos previstos en el Artículo anterior.

El Reglamento prescribirá el procedimiento de las elecciones cooperativas, la constitución de las asambleas generales y la forma de las convocatorias, quórum, votaciones y demás requisitos que deben ser observados para la validez de aquellos actos.

Artículo 30

El consejo de administración es el órgano responsable del funcionamiento administrativo de la cooperativa, y, como tal, ejerce las siguientes atribuciones:

1. Cumplir y hacer cumplir la ley, el estatuto, las decisiones de la asamblea general, los reglamentos internos y sus propios acuerdos;
2. Elegir, de su seno, a su presidente, vicepresidente y secretario, con cargo de que los demás consejeros ejerzan las funciones de vocales;
3. Aceptar la dimisión de sus miembros y la de los integrantes de los comités salvo la de los miembros del Comité Electoral;
4. Dirigir la administración de la cooperativa y supervigilar el funcionamiento de la gerencia;
5. Elegir y remover al gerente y, a propuesta de éste, nombrar y promover a los demás funcionarios y otros trabajadores cuya designación no sea atribución legal o estatutaria de aquél;
6. Designar a un integrante del propio consejo o a otra persona que debe ejercer la gerencia de la cooperativa cuando en ésta no exista plaza de gerente rentado o fuere necesario reemplazarlo;
7. Autorizar el otorgamiento de poderes, con determinación de las atribuciones delegables correspondientes;
8. Aprobar, reformar e interpretar los reglamentos internos, excepto los del consejo de vigilancia y del comité electoral;
9. Aprobar los planes y presupuestos anuales de la cooperativa;

10. Controlar y evaluar periódicamente la ejecución de las medidas que apruebe según el inciso anterior;
11. Apoyar las medidas necesarias y convenientes que la gerencia adopte para la óptima utilización de los recursos de la cooperativa y la eficaz realización de los fines de ésta;
12. Aceptar los actos de liberalidad que se constituyan a favor de la cooperativa;
13. Fijar, a propuesta del Gerente, los límites máximos de los gastos para las remuneraciones fijas y eventuales;
14. Acordar la integración de la cooperativa en organizaciones cooperativas de grado superior con arreglo a la presente Ley y con cargo de dar cuenta a la asamblea general;
15. Aprobar, en primera instancia, la memoria y los estados financieros preparados por la presidencia y/o gerencia y someterlos a la asamblea general;
16. Convocar a asamblea general, con determinación de su agenda, y a elecciones anuales;
17. Denunciar, ante la asamblea general, los casos de negligencia o de exceso de funciones en que incurrieren el consejo de vigilancia y/o el comité electoral;
18. Ejercer las demás funciones que, según la ley o el estatuto, no sean privativas de la asamblea general o de la gerencia;
19. Ejercer las demás atribuciones de su competencia según la Ley y el estatuto.

Artículo 31

El consejo de vigilancia es el órgano fiscalizador de la cooperativa y actuará sin interferir ni suspender el ejercicio de las funciones ni actividades de los órganos fiscalizados y con las atribuciones determinadas a continuación, las cuales no podrán ser ampliadas por el estatuto ni la asamblea general:

1. Elegir, de su seno, a su presidente, vice-presidente y secretario, con cargo de que los demás consejeros ejerzan las funciones de vocales;
2. Aceptar la dimisión de sus miembros;
3. Aprobar, reformar e interpretar su reglamento;
4. Solicitar al consejo de administración y/o gerencia, informes sobre el cumplimiento de los acuerdos de aquél y de la asamblea general y de las disposiciones de la ley, el estatuto y los reglamentos internos, así como sobre los actos administrativos realizados;
5. Vigilar que los fondos en caja, en bancos y los valores y títulos de la cooperativa, o los que ésta tenga en custodia o en garantía estén debidamente salvaguardados;
6. Verificar la existencia y valorización de los demás bienes de la cooperativa y particularmente de los que ella reciba de los socios en pago de sus aportaciones;
7. Disponer, cuando lo estime conveniente, la realización de arqueos de caja y auditorias;
8. Velar por que la contabilidad sea llevada con estricta sujeción a la Ley;
9. Verificar la veracidad de las informaciones contables;
10. Inspeccionar los libros de actas del consejo de administración y de los comités y los demás instrumentos a que se refiere el Artículo 37 de la presente ley;
11. Verificar la constitución y subsistencia de las garantías y/o seguros de fianza que el gerente y otros funcionarios estuvieren obligados a prestar, por disposición del estatuto, la asamblea general o los reglamentos internos;
12. Comunicar al consejo de administración y/o a la asamblea general su opinión u observaciones sobre las reclamaciones de los miembros de la cooperativa contra los órganos de ésta;
13. Proponer a la asamblea general, la adopción de las medidas previstas en el Artículo 27 (inciso 12 y 13) de esta Ley;
14. Vigilar el curso de los juicios en que la cooperativa fuere parte;
15. Disponer que en el orden del día de las sesiones de asamblea general se inserten los asuntos que estime necesarios;

16. Convocar a asamblea general cuando el consejo de administración requerido por el propio consejo de vigilancia no lo hiciere en cualquiera de los siguientes casos:
 - 16.1 En los plazos y para los fines imperativamente establecidos por el estatuto;
 - 16.2 Cuando se trata de graves infracciones de la ley, del estatuto y/o de los acuerdos de la asamblea general en que incurrieren los órganos fiscalizados;
17. Denunciar las infracciones, de la presente Ley, ante el Gobierno Regional que corresponda, sin perjuicio del inciso anterior;
18. Hacer constar, en las sesiones de asamblea general, las infracciones de la ley o el estatuto en que incurrieren ella o sus miembros;
19. Proponer al consejo de administración las ternas de auditores externos contratables por la cooperativa;
20. Exigir a los órganos fiscalizados, la adopción oportuna de las medidas correctivas recomendadas por los auditores;
21. Objetar los acuerdos de los órganos fiscalizados en cuanto fueren incompatibles con la ley, el estatuto, los reglamentos internos o las decisiones de la asamblea general;
22. Someter a la decisión definitiva de la asamblea general, las observaciones oportunamente comunicadas a los órganos fiscalizados y no aceptados por éstas;
23. Vigilar y fiscalizar las operaciones de liquidación de la cooperativa, cuando fuere el caso;
24. Fiscalizar las actividades de los órganos de la cooperativa, en todos los casos, sólo para asegurar que sean veraces y guarden conformidad con la ley, el estatuto, los acuerdos de asambleas y los reglamentos internos, con prescindencia de observaciones o pronunciamientos sobre su eficacia;
25. Presentar a la asamblea general, el informe de sus actividades y proponer las medidas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la cooperativa;
26. Ejercer las demás atribuciones de su competencia por disposición expresa de la ley.

Artículo 32

Los comités y comisiones de la cooperativa se regirán por las siguientes normas básicas:

1. Toda cooperativa tendrá, obligatoriamente, un comité de educación y un comité electoral.
2. Rigen para el comité electoral los incisos 1 a 3 del Artículo 31 de la presente Ley, en cuanto le corresponda;
3. La asamblea general y el consejo de administración podrán designar las **comisiones** que crean convenientes.

Artículo 33

Rigen para los órganos de toda cooperativa, en cuanto les respecta, las siguientes normas complementarias:

1. El número máximo de miembros titulares y suplentes de los consejos y de los comités de educación y electoral será fijado por el estatuto, en función de los fines de la cooperativa y de la naturaleza y volumen de sus actividades;
2. Los cargos de dirigentes y de gerente son personales e indelegables y, además, revocables;
3. No pueden ejercer las funciones de dirigentes ni de gerentes de la cooperativa:
 - 3.1. Los incapaces;
 - 3.2. Los quebrados;
 - 3.3. Los que por razón de sus funciones estén legalmente impedidos de ejercer actividades mercantiles;
 - 3.4. Los servidores del Sector Público que, por razón de sus funciones, deban fiscalizar a la propia cooperativa;

- 3.5. Los que tengan pleito pendiente con la cooperativa, por acciones que ellos ejerciten contra ésta;
- 3.6. Los que fueren socios, miembros del órgano administrador o directivo o del consejo de vigilancia, representantes legales o mandatarios de otras personas jurídicas que tengan intereses opuestos a los de la cooperativa, o que personalmente se encuentren en análoga situación frente a ésta;
- 3.7. Los que hubieran sido condenados por delito contra el patrimonio;
4. Los miembros de los consejos y de los comités de educación y electoral serán renovados anualmente en proporciones no menores al tercio del respectivo total y, salvo disposición diferente del estatuto, no podrán ser reelegidos para el período inmediato siguiente;
5. Los dirigentes no pueden desempeñar cargos rentados en la propia cooperativa, mientras dure su mandato, salvo cuando se trate de cooperativas de trabajadores y de los casos previstos por el Artículo 27 (inciso 4) de esta Ley;
6. El consejo de administración, los comités y el gerente adoptarán sus decisiones sin el voto de los miembros del consejo de vigilancia;
7. Los miembros de los consejos y de los comités son respectiva y solidariamente responsables por las decisiones de estos órganos;
8. Quedan eximidos de responsabilidad los miembros de los consejos y comités que salven expresamente su voto en el acto de tomarse la decisión correspondiente, con cargo de hacerlo constar en la respectiva acta y/o en carta notarial;
9. La responsabilidad solidaria de los miembros del consejo de administración y de los comités alcanza:
 - 9.1. Al Gerente: por los acuerdos que le corresponda ejecutar, salvo que deje constancia de su discrepancia y objeciones antes de ejecutarlos;
 - 9.2. A los miembros del consejo de vigilancia por los actos fiscalizables que éste no observare en la forma y en el término que establezca el estatuto, a menos que dejen constancia oportuna de sus objeciones personales;
10. El consejo de administración y los comités comunicarán todos sus acuerdos al consejo de vigilancia, dentro del término que establezca el estatuto;
11. Las observaciones del consejo de vigilancia serán canalizadas exclusivamente por conducto del presidente del consejo de administración.

Artículo 34

El presidente del consejo de administración tiene las siguientes atribuciones:

1. Ejercer las funciones de representación institucional de la cooperativa, con excepción de las comprendidas en el Artículo siguiente;
2. Presidir las sesiones de asamblea general y de consejo de administración y los actos oficiales de la cooperativa, así como coordinar las funciones de los órganos de ésta;
3. Ejercer las funciones de la gerencia hasta que asuma este cargo quien deba desempeñarla, de conformidad con el Artículo 30 (incisos 5 y 6) de la presente Ley;
4. Representar a la cooperativa ante las organizaciones cooperativas de grado superior, salvo disposición diferente del estatuto.

Artículo 35

El gerente es el funcionario ejecutivo del más alto nivel de la cooperativa y, como a tal, le competen con responsabilidad inmediata ante el consejo de administración, las siguientes atribuciones básicas:

1. Ejercer la representación administrativa y judicial de la cooperativa, con las facultades que, según la ley, corresponden al gerente, factor de comercio y empleador;

2. Suscribir, conjuntamente con el dirigente o el funcionario que determinen las normas internas:
 - 2.1. Las órdenes de retiro de fondos de bancos y otras instituciones;
 - 2.2. Los contratos y demás actos jurídicos en los que la cooperativa fuere parte;
 - 2.3. Los títulos-valores y demás instrumentos por los que se obligue a la cooperativa;
3. Representar a la cooperativa en cualesquier otros actos, salvo cuando se trate, por disposición de la ley o del estatuto de atribuciones privativas del presidente del consejo de administración;
4. Ejecutar los programas de conformidad con los planes aprobados por el consejo de administración;
5. Ejecutar los acuerdos de la asamblea general y del consejo de administración;
6. Nombrar a los trabajadores y demás colaboradores de la cooperativa y removerlos con arreglo a ley;
7. Coordinar las actividades de los comités con el funcionamiento del consejo de administración y de la propia gerencia, de acuerdo con la presidencia;
8. Asesorar a la asamblea general, al consejo de administración y a los comités y participar en las sesiones de ellos, excepto en las del comité electoral, con derecho a voz y sin voto;
9. Realizar los demás actos de su competencia según la ley y las normas internas.

Artículo 36

El gerente responderá ante la cooperativa, por:

1. Los daños y perjuicios que ocasionare a la propia cooperativa por el incumplimiento de sus obligaciones, negligencia grave, dolo o abuso de facultades o ejercicio de actividades similares a las de ella, y por las mismas causas, ante los socios o ante terceros, cuando fuere el caso;
2. La existencia, regularidad y veracidad de los libros y demás documentos que la cooperativa debe llevar por imperio de la ley, excepto por los que sean de responsabilidad de los dirigentes;
3. La veracidad de las informaciones que proporcione a la asamblea general, al consejo de administración, al consejo de vigilancia y a la presidencia;
4. La existencia de los bienes consignados en los inventarios;
5. El ocultamiento de las irregularidades que observare en las actividades de la cooperativa;
6. La conservación de los fondos sociales en caja, en bancos o en otras instituciones y en cuentas a nombre de la cooperativa;
7. El empleo de los recursos sociales en actividades distintas del objeto de la cooperativa;
8. El uso indebido del nombre y/o de los bienes sociales;
9. El incumplimiento de la ley y las normas internas.

Artículo 37

Las cooperativas deberán cumplir las siguientes obligaciones:

1. Llevar, debidamente legalizados, el registro de socios, las actas de sesiones, el registro de concurrentes a asambleas generales, la contabilidad y demás registros obligatorios, de conformidad con la ley;
2. Llevar el padrón electoral con la constancia del sufragio;
3. Presentar, dentro del término legal correspondiente los respectivos estados financieros y declaraciones juradas de ley:
 - 3.1. Al Gobierno Regional que corresponda y a los demás organismos competentes del Sector Público según ley;

3.2. A la Federación Nacional de Cooperativas del tipo que le corresponda cuando ésta existiere.

CAPITULO IV

Del Régimen Económico

Artículo 38

El capital social de la Cooperativa se constituirá con las aportaciones de los socios. El estatuto señalará el capital inicial de la cooperativa y la suma mínima que un socio debe pagar a cuenta de las aportaciones que suscriba, como requisito para ser admitido con la calidad de tal, de acuerdo con lo que establezca el Reglamento. La reducción del capital no podrá exceder del diez por ciento anual de éste.

Artículo 39

Las aportaciones se sujetarán a las siguientes normas:

1. Las aportaciones podrán ser pagadas en dinero, bienes muebles o inmuebles o servicios, de acuerdo con lo que disponga el estatuto de la cooperativa, según el tipo de ésta, sin perjuicio de las limitaciones legales correspondientes a las centrales cooperativas a que se contrae el Artículo 106 de la presente ley.
2. La valorización de los bienes y servicios con que se paguen las aportaciones se efectuará de acuerdo con el procedimiento que señale el Reglamento de la presente ley; no podrá ser valorizado como aportación el trabajo personal de los promotores de la cooperativa;
3. Las aportaciones serán de igual valor representados mediante certificados de aportación, los que deberán ser nominativos, indivisibles y transferibles en las condiciones determinadas por el Reglamento y por el estatuto de la cooperativa;
4. Las aportaciones no podrán adquirir mayor valor que el nominal fijado por el estatuto de la cooperativa, ni ser objeto de negociación en el mercado;
5. Cada certificado de aportación podrá representar una o más aportaciones en las condiciones que determine el estatuto.

Artículo 40

Las aportaciones totalmente pagadas y no retiradas antes del cierre del ejercicio anual podrán percibir un interés limitado, abonable siempre que la cooperativa obtenga remanentes. El interés de las aportaciones, que será determinado por la asamblea general, no podrá exceder, en caso alguno, del máximo legal que se autorice pagar por los depósitos bancarios de ahorros.

Artículo 41

Una cooperativa, podrá celebrar contratos de asociación en participación con entidades de los sectores público y/o privado, siempre que sean necesarios o convenientes para la realización de sus fines, en las condiciones que al efecto establezca la asamblea general, a propuesta del consejo de administración y con opinión favorable del consejo de vigilancia, y, en todo caso, con autorización previa del gobierno regional que corresponda sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 6 (inciso 1) de la presente ley.

Artículo 42

Rigen para la determinación y distribución de remanentes las siguientes reglas:

1. Para determinar los remanentes de toda cooperativa ésta deducirá de sus ingresos brutos, como gastos:

- 1.1 Los costos, los intereses de depósitos y los demás cargos que, según la legislación tributaria común, son deducibles de las rentas de tercera categoría, en cuanto le sean aplicables, según su naturaleza y actividades;
- 1.2 Las sumas que señale el estatuto, o la asamblea general, como provisiones para la reserva cooperativa y/o para desarrollar programas de educación cooperativa, previsión social y promoción de otras organizaciones cooperativas, comprendidas en los incisos 2.1 y 2.3 del presente Artículo;
2. Los remanentes se destinarán, por acuerdo de la asamblea general, para los fines y en el orden que siguen:
 - 2.1. No menos del veinte por ciento para la reserva cooperativa sin perjuicio de que el Reglamento señale porcentajes mayores o diferenciales según los tipos de cooperativas;
 - 2.2. El porcentaje necesario para el pago de los intereses de las aportaciones que correspondan a los socios, en proporción a la parte pagada de ellas;
 - 2.3. Las sumas correspondientes a fines específicos, como provisión para gastos y/o abono a la reserva cooperativa, y/o incremento del capital social, según decisión expresa de la propia asamblea general;
 - 2.4. Finalmente, los excedentes para los socios, en proporción a las operaciones que hubieren efectuado con la cooperativa, si ésta fuere de usuarios, o a su participación en el trabajo común, cuando se trate de cooperativa de trabajadores.

Artículo 43

El Artículo anterior será aplicado con observancia de las siguientes normas:

1. La reserva cooperativa será automáticamente integrada con los siguientes recursos:
 - 1.1. Los beneficios que la cooperativa obtenga como ganancia del capital o como ingresos por operaciones diferentes a las de su objeto estatutario;
 - 1.2. La parte del producto de las revalorizaciones que le corresponda según el Artículo 49 de la presente Ley;
 - 1.3. En las cooperativas de usuarios: los beneficios generados por operaciones con no socios;
 - 1.4. El producto de las donaciones, legados y subsidios que reciba la cooperativa, salvo que ellos sean expresamente otorgados para gastos específicos;
 - 1.5. Otros recursos destinados a esta reserva, por acuerdo de la asamblea general;
2. La reserva cooperativa será destinada exclusivamente a cubrir pérdidas u otras contingencias imprevistas de la cooperativa; la reserva utilizada deberá ser repuesta por ella en cuanto sus resultados anuales arrojen remanentes, en el número de ejercicios que determine el estatuto, o la asamblea general.

Artículo 44

La reserva cooperativa es irrepartible, y, por tanto, no tienen derecho a reclamar ni a recibir parte alguna de ella, los socios, los que hubieren renunciado, los excluidos ni cuando se trate de personas naturales, los herederos de unos ni otros. En el caso de que una cooperativa se transformare en persona jurídica que no sea cooperativa, o se fusionare con otra organización que tampoco lo fuere, su reserva cooperativa deberá ser íntegramente transferida a la entidad que corresponda según el Artículo 55, (inciso 3) de la presente Ley, como requisito previo para la validez de la transformación o la fusión y bajo responsabilidad personal y solidaria de los miembros de los respectivos consejos de administración y vigilancia.

Artículo 45

Cuando la naturaleza de una cooperativa lo justifique, las aportaciones, los depósitos, los intereses, los excedentes y otros derechos patrimoniales correspondientes a un socio podrán constar en una libreta y otro instrumento individual de cuentas.

Artículo 46

Cuando el socio adeude parte de las aportaciones que hayan suscrito, los excedentes e intereses que le correspondan por la parte del capital que hubiere pagado serán aplicados, hasta donde alcancen, a cubrir el saldo exigible.

Artículo 47

Los excedentes, intereses, aportaciones y depósitos que un socio tenga en la cooperativa podrán ser aplicados por ésta, en ese orden y hasta donde alcancen, a extinguir otras deudas exigibles a su cargo por obligaciones voluntarias o legales a favor de aquélla.

Artículo 48

La asamblea general podrá acordar la capitalización de los intereses y excedentes correspondientes a los socios, en vez de distribuirlos. En este caso, deberá ordenar la emisión de nuevos certificados de aportación por el valor de la suma capitalizada y su entrega a los socios, en las mismas proporciones en que éstos habrían percibido los respectivos intereses y excedentes según los incisos 2.2 y 2.4 del Artículo 42 de esta Ley. El sobrante no capitalizado deberá ser abonado al socio en el modo que establezca la propia asamblea.

Artículo 49

La cooperativa podrá revalorizar sus activos, previa autorización del gobierno regional que corresponda, sin perjuicio de hacerlo en los casos que ordene la ley. La suma resultante de la revalorización incrementará la reserva cooperativa y el capital social, en las proporciones en que éstos integren el patrimonio neto de la cooperativa.

Artículo 50

El estatuto o la asamblea general podrán autorizar que la cooperativa retenga, a título de préstamo y con la calidad de fondo rotatorio, para operaciones productivas, específicas y con cargo de devolución en las condiciones y plazos que ellos señalen, las siguientes sumas:

1. Una cantidad fija o proporcional del valor bruto de las ventas o de los servicios que la cooperativa realice por cuenta de sus socios; y,
2. Una parte o la totalidad de los intereses y/o excedentes correspondientes a los socios, según los incisos 2.2 y 2.4 del Artículo 42 de la presente Ley.

Artículo 51

Los recursos y cualesquier otros bienes de la cooperativa, así como la firma social, deberán ser utilizados sólo por los órganos autorizados de ella y únicamente para cumplir sus fines. Los infractores de esta norma quedarán solidariamente obligados a indemnizarla, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar.

CAPITULO V

Disolución y Liquidación

Artículo 52

Las cooperativas podrán ser disueltas por acuerdo de la asamblea general extraordinaria especialmente convocada para este fin, cuando así lo soliciten, por escrito, por lo menos

los dos tercios, de los socios. La resolución respectiva deberá ser comunicada al gobierno regional que corresponda.

Artículo 53

La cooperativa se disolverá necesariamente por cualquiera de las causales siguientes:

1. Por disminución del número de socios:

1.1. A menos del mínimo fijado por el Reglamento, cuando se trate de cooperativas primarias;

1.2. A una sola cooperativa, cuando se trate de centrales cooperativas;

2. Por la pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa; o de una parte tal de éstos que, según previsión del estatuto o a juicio de la asamblea general, haga imposible la continuación de la cooperativa;

3. Por conclusión del objeto específico para el que fue constituida;

4. Por aplicación del Artículo 103 de la presente Ley;

5. Por fusión con otra cooperativa, mediante incorporación total en ésta, o constitución de una nueva cooperativa que asuma la totalidad de los patrimonios de las fusionadas;

6. Por quiebra o liquidación extrajudicial.

Artículo 54

Para la aplicación de los dos Artículos anteriores rigen las siguientes normas:

1. En los casos del Artículo 52 y de los tres primeros incisos del Artículo anterior y salvo lo dispuesto por el Artículo 103 de la presente Ley, la asamblea general debe designar a la comisión liquidadora, de la que formará parte, como miembro nato un delegado del gobierno regional que corresponda; si la comisión liquidadora no fuere nombrada o no entrare en funciones dentro del término que señale el Reglamento, procederá a designarla el mismo gobierno regional;

2. Cuando fuere aplicable cualquiera de los tres primeros incisos del Artículo anterior, el gobierno regional que corresponda, solicitará la disolución y liquidación judicial de la Cooperativa, salvo que ésta lograre, extrajudicialmente y con estricta sujeción a la ley, la solución de las causales previstas en ellos;

3. La disolución y liquidación judicial de la cooperativa se tramitará en la vía del juicio de menor cuantía, con citación del gobierno regional que corresponda;

4. La quiebra y la liquidación extrajudicial de la cooperativa se rigen por la ley de la materia; pero el convenio de liquidación extrajudicial será celebrado con intervención del gobierno regional que corresponda;

5. En todo caso, la disolución y finalización del proceso de liquidación serán inscritas en el Registro de Personas Jurídicas, de oficio o a solicitud de la comisión liquidadora;

6. En caso de fusión, dejarán de existir en la fecha en que este hecho quede inscrito en el Registro de Personas Jurídicas:

6.1. Las cooperativas incorporadas, en caso de fusión por incorporación;

6.2. Todas las cooperativas fusionadas, en caso de constitución de una nueva cooperativa;

7. El Reglamento señalará los requisitos y procedimientos correspondientes a todos los casos de disolución y liquidación de las cooperativas y a su inscripción.

Artículo 55

Concluida la liquidación después de realizado el activo y solucionado el pasivo, el haber social resultante se destinará, hasta donde alcance y en el orden siguiente, a:

1. Satisfacer los gastos de la liquidación;

2. Abonar a los socios:

- 2.1. El valor de sus aportaciones pagadas, o la parte proporcional que les corresponda en caso de que el haber social fuere insuficiente;
- 2.2. Los intereses de sus aportaciones pagadas y los excedentes pendientes de pago; y,
3. Transferir el saldo neto final, si lo hubiere para ser destinado exclusivamente a fines de educación cooperativa:
 - 3.1. A la federación nacional del tipo a que corresponda la cooperativa liquidada;
 - 3.2. A falta de federación; a la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú;
 - 3.3. En defecto de la Confederación: al Instituto Nacional de Cooperativas.

Artículo 56

Liquidada la cooperativa, ningún socio ni sus herederos tiene derecho a reclamar participación en los bienes a que se refiere el inciso 3 del Artículo anterior.

TITULO III

INTEGRACION COOPERATIVA

Artículo 57

Las organizaciones de integración cooperativa son las siguientes:

1. Las centrales cooperativas;
2. Las federaciones nacionales de cooperativas;
3. La Confederación Nacional de Cooperativas del Perú;

Artículo 58

Las centrales cooperativas son organizaciones de fines económicos que se constituyen para realizar, al servicio de las cooperativas que las integren, de los socios de éstas y/o del público, actividades como las siguientes:

1. Suministrarles máquinas, equipos, herramientas, insumos, materiales de construcción, subsistencias y otros bienes necesarios o convenientes para uso, consumo, producción y/o distribución;
2. Comercializar y/o industrializar preferentemente los productos de las organizaciones integradas;
3. Efectuar importaciones y exportaciones;
4. Obtener y/o conceder préstamos, constituir garantías y efectuar otras operaciones de crédito o de financiación;
5. Proveerles bienes o realizar servicios utilizables en común;
6. Prestarles asesoría en las áreas de la especialidad de la central;
7. Coordinar y/o unificar los servicios comunes de las organizaciones cooperativas integradas;
8. Realizar cualesquier otras actividades económicas.

Artículo 59

Las centrales cooperativas se rigen por las siguientes normas básicas.

1. Podrán constituirse:
 - 1.1 Centrales cooperativas de segundo grado: integradas por cooperativas primarias de tipo homogéneo o heterogéneo y/o por otras organizaciones cooperativas;
 - 1.2 Centrales cooperativas de grado superior a las previstas en el inciso anterior: integradas por centrales u otras organizaciones cooperativas;
2. El número mínimo de cooperativas integrantes de una central será el que señale el Reglamento según la naturaleza de ésta;
3. El radio de acción de la central será el que determine su estatuto;
4. Las organizaciones cooperativas podrán integrarse en una o más centrales cooperativas;

5. Las centrales cooperativas formadas exclusivamente por cooperativas del mismo tipo podrán integrarse en la Federación correspondiente a éstas;
6. En las demás, las centrales, por su calidad jurídica de cooperativas, se rigen por las disposiciones de la presente Ley, incluídas las normas tributarias relativas a las cooperativas primarias, salvo lo dispuesto por el Artículo 77 de ella.

Artículo 60

Las federaciones nacionales de cooperativas son asociaciones de fines no económicos que se constituyen para realizar por lo menos, las siguientes actividades al servicio de las organizaciones cooperativas integradas en ellas:

1. Representar y defender los intereses de las cooperativas federadas y coordinar las actividades de éstas;
2. Vigilar la marcha de las cooperativas federadas;
3. Practicar auditorias, mediante Contadores Públicos Colegiados, en las cooperativas de su tipo cuando lo soliciten los órganos directivos de éstas;
4. Intervenir, como árbitros, en los conflictos que surjan entre las cooperativas de su tipo y/o entre éstas y/o sus socios;
5. Prestar asesoría permanente a las cooperativas de su tipo, preferentemente en las áreas cooperativas, jurídicas, administrativas, gerencial, contable, financiera, económica y educacional;
6. Promover la constitución de nuevas cooperativas en su ramo;
7. Fomentar la educación cooperativa;
8. Fomentar la integración cooperativa;
9. Efectuar operaciones económicas como medio para la realización de sus fines.

Artículo 61

Las federaciones nacionales de cooperativas se rigen por las siguientes normas básicas:

1. Podrá constituirse sólo una federación por cada tipo de cooperativas en todo el país;
2. Una federación deberá ser constituida por no menos del veinte por ciento de las cooperativas primarias del mismo tipo.

Artículo 62

La Confederación Nacional de Cooperativas del Perú tendrá las siguientes atribuciones básicas:

1. Ejercer la representación del Movimiento Cooperativo Peruano, en el país y en el exterior;
2. Realizar, en el plano nacional, funciones de fomento, coordinación y defensa de los intereses generales del Cooperativismo y del Sector Cooperativo;
3. Realizar funciones de inter-relación cooperativa en el plano internacional;
4. Coordinar la acción del Movimiento Cooperativo Peruano con la acción cooperativista del Sector Público;
5. Proponer al Estado:
 - 5.1. Las medidas necesarias y convenientes para el desarrollo cooperativo;
 - 5.2. El Perfeccionamiento del Derecho Cooperativo;
6. Fomentar el proceso de permanente integración de las organizaciones cooperativas en todos los niveles;
7. Fomentar la prioritaria integración de los servicios de interés o beneficios comunes para las organizaciones cooperativas;
8. Fomentar, intensiva y permanentemente, la educación cooperativa en todos los niveles del Movimiento Cooperativo Peruano y en los demás sectores;
9. Fomentar la unificación y fortalecimiento del sistema financiero cooperativo;

10. Defender la vigencia de los principios universales del Cooperativismo y de las bases doctrinarias reconocidas o aceptadas por el Movimiento Cooperativo Peruano.

Artículo 63

La Confederación Nacional de Cooperativas del Perú será la única organización cooperativa federada del más alto nivel de integración cooperativa y se constituirá sobre las siguientes bases:

1. La Confederación podrá ser constituida por más de la mitad de las organizaciones cooperativas existentes y aptas para integrarla según el inciso siguiente;
2. La Confederación será integrada, en igualdad de derechos y obligaciones, exclusivamente, por:
 - 2.1. Las federaciones nacionales de cooperativas;
 - 2.2. Las centrales cooperativas nacionales constituidas por más del tercio de las cooperativas de un mismo tipo establecidas en el país;
 - 2.3. Las organizaciones cooperativas a que se refiere el Artículo 106 de la presente Ley.

Artículo 64

Rigen para la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú y las federaciones nacionales de cooperativas, las siguientes normas generales:

1. La Confederación y las federaciones serán oficialmente reconocidas por el Instituto Nacional de Cooperativas en cuanto acrediten ser personas jurídicas con arreglo a la presente Ley;
2. La Confederación y las federaciones podrán pertenecer a organizaciones cooperativas internacionales;
3. La Confederación y las federaciones podrán efectuar actividades económicas compatibles con sus necesidades y funciones, como medios para la realización de sus fines;
4. Las organizaciones cooperativas integrantes de la Confederación y de las federaciones no podrán tener participación alguna en los superávits ni en los demás recursos patrimoniales de éstas, los cuales tienen, en todo caso, la calidad de fondos irrepartibles.

Artículo 65

Rigen para la Confederación, las federaciones y las centrales, las siguientes disposiciones generales:

1. La Confederación, las federaciones y las centrales tendrán sendas juntas o asambleas generales de delegados, con la calidad de órganos soberanos y formadas por los delegados de las respectivas organizaciones cooperativas integradas;
2. Los estatutos de las centrales podrán autorizar que los delegados integrantes de sus asambleas generales de delegados ejerzan el derecho de voto en proporción al número de socios de la organización cooperativa que éstos representen;
3. Las asambleas o juntas generales, consejos y/o comités de las centrales, las federaciones y la Confederación serán constituidas únicamente por los delegados de las organizaciones integradas a ellas y en tanto conserven su calidad de tales;
4. En lo demás, son aplicables a la Confederación, a las federaciones y a las centrales, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y fines, las disposiciones de la presente Ley referentes a la estructura orgánica y funcional de las cooperativas primarias.
5. La Confederación y las federaciones no podrán negar la incorporación a su seno de ninguna organización cooperativa que reúna los requisitos que la Ley exija.

TITULO IV

REGIMEN DE PROTECCION

Artículo 66

Rigen para las organizaciones cooperativas y los actos señalados a continuación que ellas celebren, las siguientes normas tributarias básicas:

1. Las cooperativas están afectas por el impuesto a la renta, sólo por los ingresos netos, provenientes de las operaciones que realicen con terceros no socios;
2. Las aportaciones que las organizaciones cooperativas paguen a la central o centrales en las que ellas se integren o estén integradas, serán deducibles, como gastos, antes de la determinación de sus remanentes, para todos los efectos de la legislación tributaria;
3. Los intereses y excedentes que las cooperativas distribuyan a sus socios o en su caso, a los herederos de éstos, se hallan exentos de todo impuesto, incluso el de la renta, dentro de los mismos límites de exención o exoneración tributarias y demás términos que la ley señala para los depósitos de ahorros en bancos;
4. La base imponible para la aplicación del impuesto al patrimonio empresarial será determinado del siguiente modo:
 - 4.1. En las cooperativas de usuarios exclusivamente sobre el valor contable de los activos, menos la suma de: la reserva cooperativa, las deudas a terceros y el noventa por ciento de las aportaciones de los socios;
 - 4.2. En las cooperativas de trabajadores exclusivamente sobre el valor contable de los activos menos: la suma de la reserva cooperativa y las deudas a terceros;
5. El Impuesto a las revaluaciones será aplicado, en cualquier cooperativa, solamente sobre el excedente de la reevaluación que incremente su capital social, de conformidad con el Artículo 49 de la presente Ley;
6. No están afectas al impuesto de alcabala, ni al adicional de alcabala, las transferencias de bienes inmuebles que las cooperativas adquieran para el cumplimiento de sus fines. Tampoco están afectas a dichos impuestos las transferencias que las cooperativas hagan a favor de sus socios para fines de vivienda;
7. El saldo neto derivado de la liquidación que la cooperativa practique al cancelar la inscripción de un socio y que deba ser pagado a los herederos de éste, deberá ser entregado a los beneficiarios tan pronto acrediten su derecho, sin necesidad de autorización especial de órgano administrativo alguno. Si los bienes adjudicados fueren inmuebles la transferencia se halla exenta del impuesto de alcabala y del adicional al de alcabala;
8. Los contratos de mutuo y de financiación que celebren las cooperativas, y los intereses que éstas perciban por tales causas, están exentos del impuesto a la renta y de todo otro tributo así como de retenciones especiales;
9. Los créditos provenientes de gobiernos extranjeros, organismos internacionales y/o de organizaciones cooperativas del exterior a favor de organizaciones cooperativas del país, se hallan exentas del impuesto a la renta;
10. Las excepciones, exoneraciones, beneficios y demás disposiciones tributarias correspondientes a las cooperativas amparan, necesariamente, a las organizaciones cooperativas de grado superior.

Artículo 67

Rigen para las organizaciones cooperativas los siguientes beneficios generales:

1. Todos los servicios del Instituto Nacional de Cooperativas y los que prestan los gobiernos regionales en materia cooperativa son gratuitos;
2. Por cualesquier servicio de los Registros Públicos, las organizaciones cooperativas pagarán el cincuenta por ciento de las tasas respectivas;
3. Las cooperativas de trabajadores pueden utilizar papel común o sin valor en los actos administrativos notariales, registrales y judiciales.

Artículo 68

El Estado otorgará a las cooperativas los siguientes beneficios:

1. Concesión de fianza, aval u otras formas de garantía que pudiesen obtener de la banca estatal, banca estatal de fomento, organismos internacionales, instituciones gubernamentales extranjeras o entidades industriales o financieras privada extranjeras, con sujeción a las disposiciones legales vigentes;
2. El Instituto Nacional de Cooperativas solicitará al Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio, la reducción arancelaria para la importación de maquinarias, equipos, herramientas, insumos, envases u otros bienes que demande el desarrollo de los diversos tipos de cooperativas.

Artículo 69

Los bancos y otras instituciones financieras del Estado, o con participación accionaria mayoritaria de éste, están obligados, bajo responsabilidad de sus órganos de dirección, a promover y estimular la constitución y funcionamiento de cooperativas afines en la esfera de sus respectivas actividades, y con tal fin deberán:

1. Prestar asistencia técnica y jurídica para el más eficaz y oportuno aprovechamiento de los servicios financieros correspondientes;
2. Otorgar préstamos ordinarios o crédito supervisados con la máxima prioridad y facilidades posibles y con sujeción a tratamientos diferenciales en cuanto se refiera a las condiciones del monto, plazo, garantía e intereses, con simplificación de requisitos y abreviación de trámites;
3. Conceder créditos con los mismos alcances previstos en el inciso anterior, para que las cooperativas prestatarias, si los estatutos de éstas lo permiten, puedan otorgarlos, a su vez, a sus socios, para inversiones compatibles con los fines de ella;
4. Crear secciones o departamentos de cooperativas destinados a realizar los servicios precedentemente señalados u otros autorizados por sus leyes y estatutos.

Artículo 70

Las disposiciones del Artículo anterior comprenden a aquellos organismos del Sector Público que, de acuerdo con las normas que los rigen y sin tener la calidad de instituciones financieras, están facultadas para conceder créditos.

Artículo 71

Las aportaciones de los socios de las cooperativas y los correspondientes excedentes e intereses, capitalizados o no, tendrán la calidad de bienes inembargables dentro de los límites y condiciones que la ley fija para los depósitos de ahorros, salvo lo dispuesto por los Artículos 20 y 21 de la presente Ley. Tratándose de las organizaciones cooperativas a que se contrae el Artículo 106 de la presente Ley, la inembargabilidad se regula conforme a las legislaciones especiales que les corresponden según dicho dispositivo.

Artículo 72

Rigen exclusivamente para las cooperativas agrarias, agrarias azucareras, agrarias cafetaleras, agrarias de colonización y comunales, así como para las centrales que ellas integren, según los casos y en cuanto les sean aplicables, los siguientes beneficios:

1. Las cooperativas que promueven los gobiernos regionales y que los adjudicatarios de unidades familiares se comprometan a integrarlas, recibirán de la Banca Regional de Fomento en forma inmediata y preferente, la ayuda crediticia que ellas requieran;
2. El Poder Ejecutivo adjudicará preferente y gratuitamente a las cooperativas, las tierras de selva, de ceja de selva o eriazas, cuando ellas las necesiten para cumplir sus fines;

3. Las cooperativas gozarán de prioridad y facilidades en la adjudicación de otras tierras de propiedad estatal o de las provenientes de irrigaciones o de colonizaciones efectuadas por el Estado, en armonía con las disposiciones pertinentes de la Ley de Reforma Agraria;
4. Las tierras afectadas por la Reforma Agraria que deban ser lotizadas entre un grupo determinado de campesinos podrán ser adjudicadas a las cooperativas que éstos constituyan, con el objeto de trabajarlas en común, a fin de mantener la unidad de la explotación sin mengua de su productividad o de evitar los gastos, demora u otros problemas a que daría lugar la parcelación. La resolución respectiva será dictada por el gobierno regional que corresponda;
5. Las cooperativas agrarias de usuarios tendrán derecho a que, en el proceso de Reforma Agraria, se les adjudique tierras en igualdad de oportunidades que a las cooperativas agrarias de trabajadores, para que las exploten por intermedio de todos sus socios o de parte de éstos, en forma simultánea o rotativa y que los excedentes generados por tal actividad sean distribuidos sólo entre quienes las trabajan, en proporción a su participación en el trabajo común;
6. El Gobierno Central y otras entidades competentes del Sector Público deberán, en cuanto sea de su competencia, conceder a las cooperativas señaladas en el presente Artículo y a las centrales que éstas integren, facilidades para la industrialización, transporte y comercialización de sus productos, mediante el establecimiento de mercados de productores, la instalación de depósitos, silos y cámaras de refrigeración para almacenamiento, u otros medios que contribuyan al fomento de la producción agropecuaria y a la regulación o estabilización de los precios;
7. Los socios de las cooperativas a que se contrae el presente Artículo que no se encuentren comprendidos en los beneficios del Instituto Peruano de Seguridad Social, ni del Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, podrán acogerse a ellos, voluntariamente, en las condiciones establecidas para el régimen del seguro facultativo; la remuneración asegurable, en este caso, será equivalente al sueldo mínimo vital vigente en la provincia del domicilio de la respectiva cooperativa para la actividad agropecuaria.

Artículo 73

Rigen para las cooperativas de ahorro y crédito, así como para las centrales cooperativas de ahorro y crédito, en cuanto les respecta, las siguientes normas especiales:

1. Estas organizaciones deberán indicar en su denominación, expresamente y de conformidad con el Artículo 11 (inciso 3.1) de la presente Ley, que realizan los servicios de ahorro y crédito;
2. Todos los depósitos en las cooperativas y centrales de ahorro y crédito están amparados por el régimen de inembargabilidad y por las exenciones, exoneraciones y beneficios legalmente establecidos para los depósitos de ahorros en empresas bancarias y/o en mutuales de vivienda;
3. Las cooperativas y centrales de ahorro y crédito podrán fijar y reajustar los intereses correspondientes a las operaciones activas y pasivas que realicen, dentro de los límites máximos que al efecto se establezcan, legalmente y en igualdad de condiciones, para ellas, las empresas bancarias comerciales y las mutuales de vivienda;
4. Las cooperativas y centrales de ahorro y crédito podrán captar depósitos de personas que no sean socias de ellas, con observancia de las normas que dicte la Superintendencia de Banca y Seguros;
5. Los retiros de depósitos en las cooperativas y centrales de ahorro y crédito podrán ser efectuados mediante órdenes de pago nominativas, con observancia de las normas que al efecto establezca la Superintendencia de Banca y Seguros;

6. La orden de pago girada a cargo de una cooperativa o central de ahorro y crédito, no pagada por falta de fondos, aparea ejecución contra el girador y/o sus endosantes y/o avalistas, con aplicación de los Artículos 174 a 178 de la Ley 16587;
7. Las cooperativas y centrales de ahorro y crédito podrán emitir certificados de depósitos de plazo fijo y de libre negociabilidad, con observancia de las normas que dicte la Superintendencia de Banca y Seguros;
8. Las aportaciones de los socios de las cooperativas y centrales de ahorro y crédito deberán ser contabilizadas en cuentas independientes de las que correspondan a sus depósitos;
9. El Banco Central de Reserva del Perú otorgará créditos y/o redescontará, con sujeción a las normas que dicte al efecto, los títulos-valores de las cooperativas y centrales de ahorro y crédito, en igualdad de condiciones que las que establezca para los bancos estatales de fomento.

Artículo 74

Rigen para las cooperativas de consumo y las cooperativas pesqueras señaladas a continuación, las siguientes normas especiales:

1. Las cooperativas de consumo se hallan exentas del impuesto a la renta, inclusive por las operaciones que realicen con terceros no socios;
2. Las cooperativas pesqueras, dedicadas exclusivamente a la pesca de consumo humano, gozarán de las mismas facilidades a que se refiere el Artículo 72 (inc.6) de la presente Ley.

Artículo 75

Rigen para las cooperativas de transportes los siguientes beneficios:

1. El Poder Ejecutivo incentivará la constitución de cooperativas de transporte colectivo de pasajeros y de carga, a niveles terrestre, aéreo, fluvial, lacustre y marítimo, y reglamentará los regímenes empresariales que les correspondan;
2. Las cooperativas podrán obtener licencias y autorizaciones de ruta para el transporte colectivo de pasajeros o de carga, y serán preferidas en igualdad de condiciones;
3. El Estado dará preferencia a las cooperativas de transportes, en el otorgamiento de licencias o autorizaciones para el transporte colectivo de pasajeros o de carga, correspondientes a líneas establecidas y concedidas a particulares, cuando la respectiva concesión hubiere caducado o fuere abandonada por el concesionario o éste fuere declarado en quiebra;
4. Las cooperativas de transporte formadas por los ex-servidores de un empresario de transporte colectivo de pasajeros, o de carga, podrán sustituirse a éste cuando su concesión hubiere sido cancelada por el Gobierno en los casos previstos por el respectivo Reglamento, siempre que la cancelación no sea consecuencia de un conflicto obrero-patronal, o cuando aquél, incumpliendo las condiciones de la concesión, retirase un número de unidades que afecten la eficiencia o la regularidad del servicio;
5. Las licencias para el transporte colectivo de pasajeros o de carga podrán ser concedidas a las cooperativas de transporte, hasta por el doble del plazo establecido para las empresas comerciales, en las condiciones que al efecto determine el Reglamento de la materia;
6. Las garantías que el Reglamento para el transporte colectivo de pasajeros o de carga exija a los solicitantes de concesiones podrán ser constituidas, cuando se trate de cooperativa de transporte, por las centrales cooperativas a las que éstas pertenezcan;
7. El Banco Industrial del Perú está facultado para otorgar préstamos o avales preferenciales a las cooperativas de transportes, dedicadas al transporte colectivo de

pasajeros o de carga, previa opinión favorable del gobierno regional que corresponda, en cada caso;

8. La importación de vehículos, llantas, motores, repuestos de frenos y otros repuestos automotrices esenciales que requieran las cooperativas de transporte, se hallan exoneradas de derechos arancelarios en función de las necesidades del transporte colectivo de pasajeros o de carga de las ciudades, regiones o rutas inter-urbanas en que ellas operen. La exoneración se otorgará en cada caso mediante Resolución Ejecutiva Regional, refrendada por el Secretario Regional de Asuntos de Infraestructura.

Artículo 76

Rigen para las cooperativas de vivienda las siguientes normas especiales:

1. La organización que se proponga operar como cooperativa de vivienda; o central de cooperativas de vivienda; deberá constituirse y funcionar necesariamente con el objeto de realizar acciones relativas exclusivamente a viviendas comprendidas dentro del régimen legal de viviendas de interés económico o social. Las que no cumplan esta condición incurrirán en infracción del Artículo 10 de la presente Ley;

2. El número máximo de socios inscribibles en una cooperativa de vivienda no podrá ser mayor bajo responsabilidad de sus promotores y dirigentes, del número de unidades de vivienda de que disponga o de la urbanización que se proponga ejecutar, ni de las que, según las limitaciones de los reglamentos de urbanismo y construcciones y de las ordenanzas municipales, pudiere construir en terrenos destinados a tal fin;

3. La cooperativa de vivienda que, después de haber iniciado o concluido la construcción de las viviendas que fueron el objeto de su constitución, decidiere destinar uno o más terrenos de su propiedad no edificadas para la ejecución de nuevos programas de vivienda, o los que hubiere adquirido con tal propósito, deberá promover la formación de una nueva cooperativa de vivienda, integrable solo por personas que no sean sus socios, y transferirlas a ésta;

4. Todos los grupos inmobiliarios financiados, contruidos o adquiridos de cualquier otro modo por cooperativas de vivienda (edificios, grupos habitacionales, agrupamientos vecinales, urbanizaciones u otros conjuntos similares) quedarán automáticamente y obligatoriamente sometidos, desde el momento en que las respectivas unidades de vivienda fueren parcial o totalmente adjudicadas a los socios que deban ocuparlas como usuarios o propietarios, a las normas aplicables del régimen legal de la Propiedad Horizontal, sin perjuicio de las siguientes reglas;

4.1. Las cooperativas será integrada exclusivamente por los adjudicatarios de las unidades de vivienda;

4.2. Todas las atribuciones de la Junta de Propietarios serán ejercidas por la asamblea general de la cooperativa, en la que cada socio tendrá derecho sólo a un voto por persona;

4.3. La sección o secciones inmobiliarias que no tengan la calidad de viviendas de interés económico o social integrarán el patrimonio de la cooperativa para todos sus efectos;

4.4. En caso de cancelación de la inscripción de un socio, éste quedará automáticamente sometido a la legislación de la propiedad horizontal, con obligación de participar en la asamblea general de socios en todos los asuntos relacionados con la vivienda de su propiedad, en igualdad de condiciones con los socios de la cooperativa;

4.5. El Reglamento de Cooperativas de Vivienda, definirá en concordancia con la presente Ley y la legislación de la propiedad horizontal, los demás derechos y obligaciones de los socios, cuando las unidades de vivienda de la cooperativa se hallaren ubicadas en terrenos discontinuos;

- 4.6. Disuelta la cooperativa, quedará automáticamente restablecida la respectiva Junta de Propietarios, con todas sus atribuciones, a partir de la fecha de inscripción de la disolución de aquélla;
5. El Poder ejecutivo adjudicará gratuitamente a las cooperativas de vivienda, en favor de las urbanizaciones que ellas proyecten los terrenos eriazos de libre disposición que resulten técnicamente apropiados, y les otorgará preferencia y facilidades en la venta de otros predios de propiedad fiscal para fines de vivienda;
6. Las dependencias de vivienda de los gobiernos regionales elaborarán los proyectos de construcción de viviendas, agrupamientos vecinales o urbanizaciones promovidos por cooperativas de vivienda y los cederá a éstas a precios de costo, a condición de que no participen intermediarios y, en todo caso, con opinión favorable de la dependencia del gobierno regional que corresponda;
7. Las urbanizaciones que emprenden las cooperativas de vivienda quedarán exentas de los derechos de urbanización y gozarán de tratamiento especial respecto a las especificaciones de obra de urbanización y reserva de área;
8. Los préstamos que las cooperativas de vivienda soliciten a las entidades internacionales podrán concretarse directamente o por intermedio de las instituciones de fideicomiso que aquéllas designen;
9. Las cooperativas de vivienda gozarán de facilidades en el otorgamiento directo de crédito preferente y con la máxima prioridad por el Banco de la Vivienda del Perú;
10. El Banco Central Hipotecario del Perú, el Banco de la Vivienda del Perú y el Banco de Materiales otorgarán préstamos globales a las cooperativas de vivienda, directamente, con tratamiento diferencial favorable a ellas en cuanto al monto, garantías, tipos de interés, plazos y sin afectar sus costos;
11. Los préstamos que las cooperativas de vivienda obtengan según los tres incisos anteriores podrán ser destinados por ellas, para la construcción de viviendas de propiedad cooperativa o de unidades de vivienda adjudicables en propiedad a sus socios.
12. Las mutuales de vivienda concederán préstamos globales a las cooperativas de vivienda, con tratamiento diferencial favorable a ellas en cuanto al monto, garantías, tipos de interés y plazos y con sujeción a las normas que dicte el Banco de la Vivienda del Perú;
13. Las entidades nacionales o regionales de fomento y desarrollo otorgarán asistencia técnica y crediticia a las cooperativas de vivienda, dentro de sus planes de desarrollo de la vivienda rural y urbana en el país;
14. Rigen para las cooperativas de vivienda todas las exenciones, exoneraciones y beneficios tributarios correspondientes a favor de los constructores, vendedores y locadores de unidades de vivienda de tipo económico, en todo cuanto no está específicamente previsto en la presente Ley, y le sean aplicables;
15. Las cooperativas de vivienda formadas por trabajadores del Sector Público y de la actividad privada podrán ampararse en todo cuanto les fuere aplicable y sea compatible con la presente Ley, en el régimen legal establecido para las asociaciones pro-vivienda. Al efecto, gozarán de un régimen preferente con respecto a los descuentos de haberes o pensiones, a los anticipos sobre las reservas indemnizatorias y a su devolución.

Artículo 77

Las aportaciones que se paguen a cooperativas primarias, así como el dinero que éstas reciben en depósito o préstamo a plazos fijos o indeterminados no menores de tres años, estarán exonerados de todo tributo sin excepción alguna, incluso del impuesto a la renta, y podrán ser deducidos de la renta neta para los efectos de este tributo, hasta por el cincuenta por ciento de ella y hasta por el máximo equivalente a diez unidades impositivas tributarias (U.I.T.). Los beneficios establecidos por el presente Artículo cesarán y los

impuestos que habrían devengado las sumas exoneradas devendrán inmediatamente pagaderos en los casos en que las aportaciones, los depósitos o los préstamos fueren retirados antes del plazo mínimo señalado en el párrafo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 73 (inciso 7) de la presente Ley.

Artículo 78

Rigen para las organizaciones cooperativas que realicen operaciones económicas en el exterior las siguientes normas básicas:

1. Las centrales cooperativas pueden exportar directamente sus productos y/o los de las cooperativas integradas en ellas.
2. Las empresas públicas y otros organismos del Sector Público legalmente autorizados para controlar o realizar exportaciones por cuenta ajena otorgarán a las centrales cooperativas que exporten, la primera y preferente prioridad en la colocación de los productos de éstas y/o de las cooperativas integradas en ellas, en los mercados del exterior;
3. Las centrales cooperativas que exporten gozarán de prioridad y preferencia en los trámites administrativos y de las demás facilidades que fueren necesarias para viabilizar la oportuna exportación de sus productos sin perjuicio de los convenios de comercio que celebre el Estado;
4. Son aplicables a las cooperativas y centrales cooperativas, la legislación de promoción para las exportaciones no tradicionales y la legislación que favorece a las empresas descentralizadas, en la medida que ellas cumplan los requisitos correspondientes;
5. Las cooperativas y centrales cooperativas gozan de capacidad jurídica suficiente para establecer sucursales, agencias u otras dependencias en el exterior;
6. El Banco Central de Reserva del Perú podrá liberar mediante resolución cambiaria, todo tipo de retenciones a los recursos de créditos provenientes del exterior cuando éstos se hallen destinados a organizaciones cooperativas establecidas en el país.

Artículo 79

Toda dependencia del Sector Público y cualquier empleador de otros sectores deberán descontar y retener con cargo a las remuneraciones, pensiones y/o beneficios sociales de sus servidores activos, cesantes y jubilados, las sumas que éstos deseen abonar por cualquier concepto a una o más cooperativas, a solicitud expresa de ellos y con observancia de las siguientes normas:

1. La solicitud de descuento no podrá ser revocada sino con autorización de la cooperativa o cooperativas beneficiarias;
2. Cada descuento será practicado con prioridad sobre cualquier otra obligación del servidor, salvo los ordenados por mandamiento judicial.
3. Cuando se trate de dos o más cooperativas beneficiarias, la prioridad de los descuentos las favorecerá en el orden cronológico de presentación de las solicitudes de descuento correspondientes;
4. Los descuentos serán hechos sin deducciones adicionales a cargo del servidor ni costo alguno para la cooperativa beneficiaria, salvo los gastos de transferencia pagados a terceros;
5. Las sumas retenidas devengarán a favor de la cooperativa beneficiaria y a cargo del retenedor, el interés máximo legalmente autorizado para las colocaciones bancarias, desde el día siguiente a la fecha del descuento hasta que sean transferidas a aquélla;
6. Las sumas descontadas y en su caso los intereses según el inciso anterior serán transferidos a favor de la cooperativa beneficiaria, dentro de los quince días siguientes al descuento, bajo responsabilidad del retenedor.

Artículo 80

Todo empleador particular está obligado a facilitar, en su centro de trabajo, la organización y funcionamiento de cooperativas integradas por los trabajadores a su servicio, cuando éstos lo soliciten. Análoga obligación recaerá en las autoridades superiores de las dependencias del Sector Público respecto de los trabajadores al servicio de éstas.

Artículo 81

Rigen para las donaciones y legados que se otorguen a favor de organizaciones cooperativas inscritas en el Registro Tributario de Entidades Perceptoras de Asignaciones Cívicas, a condición de que tales actos de liberalidad sean destinados exclusivamente a fines de educación cooperativa, las siguientes normas:

1. Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad, en dinero o en otros bienes, son deducibles como gastos en la determinación de la renta neta imponible de cualquier categoría para los efectos del impuesto a la renta, siempre que el valor total de ellas no exceda del quince por ciento de la renta neta del contribuyente donante computada antes de efectuar tal deducción.
2. Las donaciones y los legados están exentos de todo impuesto.

Artículo 82

La Confederación Nacional de Cooperativas y las federaciones nacionales de cooperativas están exentas del impuesto a la renta. Las demás organizaciones cooperativas podrán acogerse, para todos los efectos tributarios y sin perjuicio del régimen de protección previsto por la presente Ley, a la nueva legislación tributaria que favorezca a la pequeña empresa y siempre que se encuentren dentro de los límites que ella prescriba.

Artículo 83

Rigen a favor de las organizaciones cooperativas, en cuanto les sean aplicables las siguientes normas generales:

1. El Régimen de Protección Cooperativa regulado por la presente Ley funciona independientemente y sin perjuicio de las exenciones, exoneraciones, beneficios y demás incentivos tributarios y otras medidas promocionales establecidas por otras normas legales en favor de las organizaciones cooperativas y sus socios y/o de los que amparen a ellas como a personas jurídicas o empresas, por razón de sus actividades, por su ubicación geográfica o por cualesquier otras causas o motivaciones;
2. Las cooperativas y centrales cooperativas recibirán el tratamiento de empresas de propiedad social o autogestionarias para todos los efectos de las exenciones, exoneraciones, beneficios y demás incentivos tributarios, apoyo financiero y demás medidas promocionales establecidas para éstas por la Legislación de Empresas de Propiedad Social o de Autogestión, en todo cuanto no está específicamente previsto en la presente Ley y les sean aplicables;
3. En todo caso, las exenciones, exoneraciones, beneficios y demás incentivos tributarios, apoyo financiero y demás medidas promocionales establecidos a favor de empresas individuales o colectivas o personas jurídicas de los otros sectores por razón de sus actividades, por su ubicación geográfica o por cualesquier otras causas o motivaciones, se extienden, automática y necesariamente en provecho de las organizaciones cooperativas, si éstas reúnen los mismos requisitos que aquéllas y en todo cuanto les sean aplicables y más favorables;

4. Quedan subsistentes las exenciones, exoneraciones, franquicias y otras prerrogativas o beneficios que hayan sido establecidos a favor de las cooperativas que la presente Ley no los incluye expresamente;
5. El régimen de protección de que gozan las organizaciones cooperativas no podrá ser menor del que favorezca a otros sectores que realicen actividades análogas;
6. Las cooperativas pueden realizar cualesquier actividades económicas propias de su tipo, naturaleza u objetivos, salvo las limitaciones expresamente previstas por la ley o las que, por disposición de ésta, correspondan privativamente a empresas cuyo capital es o debe ser de propiedad exclusiva del Sector Público.

Artículo 84

Las organizaciones cooperativas no están exoneradas de las aportaciones que, como a empleadoras, les corresponde pagar al Instituto Peruano de Seguridad Social, ni de las retribuciones o arbitrios por servicios municipales.

Artículo 85

El régimen de protección establecido por la presente Ley correspondiente a las organizaciones cooperativas (incluidas las exenciones o exoneraciones y demás beneficios tributarios) regirá, necesariamente, con sujeción a las siguientes condiciones, en cuanto les respecta:

1. El régimen de protección amparará únicamente a la organización cooperativa que acredite, mediante certificación del gobierno regional que corresponda, su constitución y funcionamiento con sujeción a la presente Ley y los Reglamentos y que además:
 - 1.1 Cuando se trate de cooperativa primaria: que esté integrada a la federación nacional de cooperativas de su tipo, si ésta existiere;
 - 1.2 Cuando se trate de una central cooperativa: que esté integrada a su federación y en el caso del Artículo 63 (inciso 2.2) de la presente Ley, a la Confederación Nacional de Cooperativas, cuando ésta se constituya;
 - 1.3 Cuando se trate de cualquiera de las organizaciones cooperativas a que se contrae el Artículo 106 de la presente Ley; que esté integrada a la Confederación Nacional de Cooperativas, cuando ésta se constituya;
2. El inciso anterior regirá para la organización cooperativa amparada sólo a partir de la fecha de la certificación prevista en él;
3. El Instituto Nacional de Cooperativas dejará sin efecto la certificación prevista en el primer inciso del presente Artículo, cuando la organización cooperativa beneficiaria incumpliere parcial o totalmente las condiciones precedentemente señaladas, y desde entonces ella quedará excluida del régimen de protección cooperativa para todos los efectos.

TITULO V

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS

Artículo 86

El Instituto Nacional de Cooperativas (INCOOP):

1. Es una institución pública descentralizada del Ministerio de Trabajo y Promoción Social con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía técnica y administrativa;
2. Es el órgano estatal de promoción y supervisión nacional del Sector Cooperativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 96 de la presente Ley;

3. Tiene el deber de proponer la política cooperativa del Estado y normar la fiscalización del Sector Cooperativo, así como de fiscalizar las organizaciones cooperativas de nivel nacional, con las atribuciones que le son inherentes según esta Ley.

Artículo 87

El Instituto Nacional de Cooperativas, como órgano de promoción cooperativa, ejerce, sin perjuicio de lo que en esta materia realicen los gobiernos regionales; las siguientes funciones básicas:

1. Fomentar y apoyar por todos los medios a su alcance, en concordancia con los Artículos 1 y 2 de la presente Ley y en función de las necesidades sociales, económicas y culturales del país, el desarrollo del Cooperativismo, y con tal finalidad deberá:

1.1 Proponer el Poder Ejecutivo, la adopción de las medidas necesarias para el perfeccionamiento de la política cooperativista del Estado;

1.2 Elaborar y ejecutar el plan y la programación nacionales del desarrollo cooperativo, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo;

1.3 Promover la participación del Sector Cooperativo en la elaboración de los planes nacionales de desarrollo;

1.4 Promover, auspiciar y realizar estudios e investigaciones sobre las posibilidades de desarrollo cooperativo, de acuerdo con las variadas características económicas, sociales y culturales del país;

1.5 Promover la permanente coordinación de las acciones estatales de fomento, protección y supervisión cooperativas, con los demás organismos competentes del Sector Público;

2. Proponer al Poder Ejecutivo los proyectos de:

2.1 Reglamentos de la presente Ley y de otras normas legales sobre materia cooperativa;

2.2 Otras normas legales y/o administrativas necesarias o convenientes para el desarrollo cooperativo y el progresivo perfeccionamiento del Derecho Cooperativo;

3. Dictar las normas necesarias para el eficaz cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones gubernamentales relativas a las organizaciones cooperativas;

4. Fomentar y apoyar, en coordinación con la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú:

4.1 La constitución de nuevas organizaciones cooperativas en el territorio nacional y el fortalecimiento de las existentes;

4.2 El proceso de permanente integración del Movimiento Cooperativo Peruano;

4.3 La integración del Movimiento Cooperativo a nivel internacional, en función de los intereses del país;

4.4 La creación e incremento de fuentes nacionales de financiamiento cooperativo y/o la apertura y fortalecimiento de canales de ayuda exterior en favor del Sector certámenes Cooperativo;

4.5 La unificación y el fortalecimiento del sistema financiero cooperativo;

4.6 La educación cooperativa intensiva en el Sector Cooperativo y en los demás Sectores;

4.7 La formación y el adiestramiento de dirigentes y técnicos de cooperativas, de ser posible en coordinación con el Ministerio de Educación, las universidades y los organismos internacionales interesados en el fomento del Cooperativismo;

4.8 La difusión de los Principios, la Doctrina y el Derecho Cooperativos;

4.9 La divulgación de las técnicas de constitución, administración, funcionamiento y control de las organizaciones cooperativas;

4.10 La edición de libros y otras publicaciones y la utilización de cualesquier otros medios de comunicación para la difusión del Cooperativismo;

4.11 La realización de certámenes nacionales e internacionales sobre materias cooperativas;

- 4.12 La participación de representantes del Movimiento Cooperativo Peruano en internacionales concernientes al Cooperativismo;
5. Realizar servicios de asesoramiento en materia cooperativa en favor de las demás entidades del Sector Público, de las organizaciones cooperativas y de otras personas interesadas en el desarrollo y difusión del Cooperativismo;
6. Participar en las reuniones nacionales e internacionales sobre materia cooperativa;
7. Integrar, mediante delegados con derecho a voz y voto, los directorios u órganos de gobierno de las siguientes entidades:
- 7.1 Bancos y otras instituciones estatales a que se refiere el Artículo 69 de la presente Ley;
- 7.2 Sistema Nacional de Planificación;
- 7.3 Instituciones públicas o empresas públicas u otros organismos dependientes del Poder Ejecutivo que por la naturaleza de sus fines, puedan promover, fomentar y/o financiar el desarrollo del Cooperativismo;
8. Adoptar otras medidas necesarias o convenientes para asegurar el libre desarrollo del Cooperativismo y la autonomía del Movimiento Cooperativo Peruano;
9. Informar, en su memoria anual, sobre las acciones estatales de fomento y promoción del Cooperativismo y sobre la situación, necesidades y problemas del Sector Cooperativo y proponer las medidas necesarias para el desarrollo de éste;
10. Realizar otras acciones complementarias de las enunciadas precedentemente o conexas con ellas.

Artículo 88

Los gobiernos regionales ejercen, dentro de su ámbito, las siguientes funciones en materia de supervisión cooperativa:

1. Absolver consultas sobre la aplicación del Derecho Positivo de Cooperativas, excepto las que sean de competencia privativa de otros organismos sectoriales, en los casos a que se refiere el Artículo 96 de la presente Ley.
2. Fiscalizar el funcionamiento de todas las organizaciones integrantes del Sector Cooperativo, sin perjuicio de las funciones sectoriales reguladas por el Artículo 96 de esta Ley, exclusivamente por los siguientes medios:
 - 2.1 Vigilar la marcha administrativa, financiera y económica de ellas, mediante el examen de sus libros, estados financieros y demás documentos pertinentes;
 - 2.2 Practicar visitas de inspección y auditoria con facultad de examinar los mismos instrumentos señalados en el párrafo anterior;
 - 2.3 Delegar en sociedades de auditoria independientes, previamente seleccionadas por concurso, la función de auditar a las cooperativas y centrales cuyo volumen de operaciones exceda del límite que al efecto fije el Reglamento, con cargo de que los respectivos honorarios sean pagados por éstas;
 - 2.4 Acreditar representantes con la calidad de observadores, ante las asambleas generales de las cooperativas, cuando lo estime conveniente o éstas lo soliciten;
 - 2.5 Sancionar las infracciones de esta Ley cometidas en el funcionamiento de las cooperativas y denunciarlas, cuando fuere el caso, ante las demás autoridades competentes;
3. Fiscalizar a las entidades a que se refiere el Artículo 108 de la presente Ley, con facultad de revocar la autorización correspondiente en caso de infracción de dicha norma;
4. Ejercer las demás atribuciones de fiscalización que expresamente le confieran otras leyes y los reglamentos.

Artículo 89

Son órganos del Instituto Nacional de Cooperativas (INCOOP):

1. El Consejo Directivo;
2. El Comité Ejecutivo; y
3. La Dirección Ejecutiva.

Artículo 90

El Consejo Directivo ejerce, como autoridad máxima, la dirección superior y la suma de las funciones legales del Instituto Nacional de Cooperativas, en cuanto el Reglamento de éste no las confiera a los órganos inferiores, así como la dirección, administración y supervisión del presupuesto institucional, y estará formado por:

1. Un representante del Presidente de la República que lo presidirá, nombrado mediante resolución suprema refrendada por el Ministro de Trabajo;
2. Un representante del Ministerio de Trabajo, que será el Vice Presidente;
3. El presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú;
4. Hasta seis delegados de los gobiernos regionales, en número no mayor al de los representantes de las federaciones previstas en el inciso siguiente;
5. Hasta cinco presidentes de las federaciones nacionales de cooperativas elegidos entre ellos.

Artículo 91

El Comité Ejecutivo tendrá las facultades de dirección administrativa y técnica del Instituto Nacional de Cooperativas que le confiere el Reglamento de éste y las que le delegue el Consejo Directivo y será integrado por cinco miembros de él del siguiente modo:

1. Por el Presidente del Consejo, o el Vice-Presidente, que lo presidirá;
2. Por dos de los delegados del Sector Público a que se refiere el inciso 4 del Artículo anterior, elegidos por ellos;
3. Por el Presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú y por uno de los delegados del Sector Cooperativo mencionados en el inciso 5) del Artículo anterior elegido por ellos.

Artículo 92

El Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Cooperativas (INCOOP) será elegido por el Consejo Directivo, y como su funcionario ejecutivo del más alto nivel, ejercerá las siguientes funciones:

1. Ejercer la representación del Instituto con las atribuciones que le confiera el Consejo Directivo;
2. Ejecutar los acuerdos de los órganos superiores del Instituto;
3. Proponer al Consejo Directivo la aprobación de las normas previstas por el Artículo 87 (inciso 3) de la presente Ley;
4. Administrar los bienes y recursos del Instituto;
5. Ejercer la dirección del personal de trabajadores del Instituto y de las dependencias de éste;
6. Ejercer las funciones de Secretario del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo del Instituto, con derecho a voz y sin voto;
7. Ejercer las demás atribuciones que le confieran el Reglamento y los órganos superiores del Instituto.

Artículo 93

El Reglamento de la presente Ley determinará:

1. Las atribuciones y jurisdicciones correspondientes, en orden jerárquico, al Consejo Directivo, Comité Ejecutivo, Director Ejecutivo y Directores Regionales del Instituto Nacional de Cooperativas;
2. La organización, el funcionamiento y las atribuciones del Tribunal de Arbitraje Cooperativo;
3. Los regímenes de organización y funcionamiento de las oficinas y servicios del Instituto y de la administración de sus bienes y recursos.

Artículo 94

Los servidores rentados del Instituto Nacional de Cooperativas están sometidos al régimen legal de los Trabajadores del Sector Público.

Artículo 95

Son recursos del Instituto Nacional de Cooperativas (INCOOP):

1. Las asignaciones que le correspondan, por transferencias corrientes y de capital según el Presupuesto General de la República;
2. Los provenientes de operaciones de crédito interno y externo o, celebrados a su favor con arreglo a Ley;
3. Las transferencias provenientes de convenios, contratos y otros actos jurídicos celebrados con personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras y/o entidades internacionales;
4. Las donaciones y legados que se constituyan a favor del Instituto;
5. Los recursos resultantes de la venta de los activos fijos del Instituto dados de baja;
6. El producto de las multas administrativamente consentidas o ejecutoriadas que las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo o las judiciales impongan a cualquier persona por aplicación de la presente Ley;
7. Otros ingresos legalmente generados en favor del Instituto Nacional de Cooperativas.

Artículo 96

Independientemente de las funciones privativas del Instituto Nacional de Cooperativas, los gobiernos regionales tienen competencias sobre las cooperativas a que se refiere el inciso 2 del Artículo 7 de la presente Ley y sobre las de cualquier otro tipo empresarial para supervisarlas, controlarlas y asesorarlas en cuanto se refiere a sus actividades de producción y/o de servicios, con sujeción a las normas generales aplicables a otras empresas de fines similares, sin perjuicio de las disposiciones especiales del Derecho Positivo de Cooperativas. La Superintendencia de banca y Seguros tiene competencias sobre las cooperativas de ahorro y crédito que, además de servir a sus socios, operen con fondos del público, así como sobre las organizaciones cooperativas a que se refieren los Artículos 106 y 107 de la presente Ley.

Artículo 97

Las reclamaciones y los recursos administrativos que se interpongan ante el Instituto Nacional de Cooperativas serán tramitados con sujeción al siguiente procedimiento:

1. Las reclamaciones y los recursos de reconsideración serán interpuestos ante la autoridad cooperativa que hubiere dictado la resolución impugnada;
2. Los recursos de apelación serán interpuestos:
 - 2.1 Ante el Director Ejecutivo: si se apelare de resolución del Director Regional;
 - 2.2 Ante el Comité Ejecutivo: si se apelare de resolución del Director Ejecutivo;
 - 2.3 Ante el Consejo Directivo: si se apelare de resolución del Comité Ejecutivo;
3. Los recursos precedentemente autorizados serán admitidos a trámite con los fundamentos expuestos en ellos, sin ningún otro requisito ni limitación;

4. Las resoluciones serán ejecutadas sólo cuando queden administrativamente consentidas o ejecutoriadas;
5. Las resoluciones de última instancia administrativa podrán ser contradichas ante el juez del domicilio de la persona recurrente, dentro de los seis meses posteriores a su notificación y sin perjuicio de lo dispuesto por el inciso anterior;
6. En lo demás, regirán en cuanto no se opongan a la presente Ley, las Normas Generales del Procedimiento Administrativo.

Artículo 98

La organización cooperativa agraviada con una disposición del funcionario del Instituto Nacional de Cooperativas que le imponga obligaciones que la ley no ordena imperativamente o que le impida realizar actos no prohibidos por ésta, o que de otro modo viole el Artículo 2 de la presente Ley o las garantías legales del procedimiento administrativo, podrá ocurrir en queja ante el Presidente de dicha institución, con sujeción al siguiente procedimiento:

1. La queja será interpuesta dentro de los quince días más el término de la distancia posteriores a la notificación con el acto administrativo que la motiva;
2. Serán admisibles sólo las pruebas instrumentales acompañadas a la queja;
3. Admitida la queja, el Presidente dispondrá el funcionario quejado emita informe dentro del octavo día, más el término de la distancia, bajo apercibimiento de darse por ciertas las afirmaciones expresadas en ella;
4. Al vencimiento de dicho término, el Presidente resolverá la queja sin otro trámite;
5. En la resolución que declare fundada la queja, se ordenará la suspensión del acto administrativo que la generó, con aviso inmediato a la autoridad superior de quien dependa el funcionario quejado, para los fines de ley a que hubiere lugar;
6. En la resolución que declare totalmente infundada la queja, se impondrá a la organización cooperativa quejosa, una multa equivalente a suma no menor de un sueldo mínimo mensual vital ni mayor de doce sueldos mínimos vitales, vigentes en la provincia del domicilio, de aquélla para la actividad industrial y comercial;
7. La presentación de la queja no impide ni interfiere la interposición ni la tramitación de los recursos autorizados por el Artículo anterior.

TITULO VI SANCIONES

Artículo 99

El gobierno regional que corresponda, cuando tenga conocimiento de irregularidades en la marcha de una cooperativa y antes de imponerle sanciones, deberá:

1. Exigir que los consejos de administración y de vigilancia emitan informe respectivo, dentro de término perentorio;
2. Convocar a asamblea general, si el consejo de administración, requerido para ello, no lo hiciere.

Artículo 100

Las entidades del Sector Cooperativo serán sancionados por el gobierno regional que corresponda sólo en los siguientes casos:

1. Cuando incumplan las obligaciones imperativamente establecidas por la presente Ley o por los Reglamentos, o contravengan las prohibiciones determinados por ellos, y
2. Cuando infrinjan las resoluciones consentidas o ejecutoriadas que el Instituto Nacional de Cooperativas dicte con arreglo a esta Ley.

Artículo 101

El Reglamento definirá, taxativamente, las sanciones correspondientes a las infracciones a que se refiere el Artículo anterior, dentro de los siguientes límites:

1. Multas, según escalas progresivas y diferenciales, de acuerdo con el tipo, capacidad económica y naturaleza jurídica de las entidades del Sector Cooperativo;
2. Intervención, en la forma establecida por el Artículo 102 de la presente Ley;
3. Aplicación del Artículo 103 de esta Ley.

Artículo 102

El Reglamento regulará la intervención a que se refiere el inciso 2 del Artículo anterior sobre las siguientes bases:

1. Si a pesar de la multa máxima subsistiere la infracción sancionada o se reincidiere en ella, el gobierno regional que corresponda requerirá a los consejos de administración y de vigilancia para que regularice el funcionamiento de la cooperativa, dentro de términos perentorio y bajo apercibimiento de intervención;
2. Decretada la intervención, el interventor nombrado por el gobierno regional que corresponda convocará a asamblea general extraordinaria, la que deberá, bajo apercibimiento de aplicarse a la cooperativa infractora el Artículo 103 de la presente Ley, regularizar el funcionamiento de ella si fuere requerida para tal fin, sin perjuicio de imponer las sanciones a que hubiere lugar a los dirigentes responsables de la infracción;
3. Puede ser nombrada, como interventora, una sociedad de auditoría, cuando lo justificaren las circunstancias;
4. Cesará la intervención, en cualquier momento, cuando quede definitivamente regularizado el funcionamiento de la cooperativa;
5. La intervención tendrá una duración máxima de noventa días, prorrogables solo por resolución justificada del gobierno regional que corresponda.
6. Durante la intervención, continuarán en ejercicio todos los dirigentes y funcionarios de la cooperativa; pero todos los actos jurídicos que éstos celebren de conformidad con la ley y el estatuto deberán ser necesariamente autorizados por el interventor;
7. El interventor rendirá, al término de su gestión, informe y cuenta documentada ante la asamblea general de la cooperativa intervenida, sin perjuicio de los que le corresponda presentar al gobierno regional que corresponda.

Artículo 103

Si vencido el término a que se refiere el inciso 5 del Artículo anterior, o su prórroga, no se regularizare el funcionamiento de la cooperativa, regirán las siguientes normas:

1. El gobierno regional que corresponda podrá decretar la cesación de actividades de la cooperativa infractora y solicitar la disolución y liquidación judicial de ésta, con sujeción al Artículo 54 (incisos 1, 2, 3, 5 y 7) de la presente Ley;
2. La liquidación podrá practicarse extrajudicialmente si así lo decide la asamblea general de la cooperativa sancionada, con sujeción al Artículo 54 (inciso 4) de la presente Ley.

Artículo 104

Si se comprobare la comisión del delito de defraudación tributaria al amparo de las disposiciones protectoras de la presente Ley, los infractores, sus cómplices y encubridores quedarán obligados, solidariamente, a pagar, además del tributo devengado, una multa equivalente al décuplo del monto de la defraudación, sin perjuicio de las sanciones penales previstas por el Código Tributario. El gobierno regional que corresponda denunciará ante el Juez competente, a solicitud de la organización cooperativa agraviada o de oficio, la comisión de los delitos contra el patrimonio que se cometan en agravio de ésta.

Artículo 105

La autoridad administrativa competente ordenará, a solicitud del gobierno regional que corresponda la clausura de los establecimientos y/o la cancelación de las actividades económicas de quien, a pesar del requerimiento de este organismo, persistiera, por esos medios, en la infracción de la presente Ley en los casos previstos por sus Artículos 10, 12 (inciso 9), 103 y 108 (inciso 3).

TITULO VII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 106

Las organizaciones cooperativas señaladas a continuación tienen en todo caso la naturaleza jurídica de centrales cooperativas, podrán operar con sus socios y con el público, y se sujetarán a las leyes especiales citadas enseguida y demás normas complementarias y conexas aplicables a empresas similares del Sector Privado y, en cuanto no estuviere previsto por ellas, a la presente Ley;

1. Los Bancos Cooperativos tienen por objeto realizar toda clase de operaciones propias de la Banca Comercial y se rigen por la Legislación de Bancos;
2. Las cooperativas de seguros tienen por objeto realizar servicios de seguros contractuales propios de las empresas de seguros y se rigen por la Legislación de Seguros;
3. Las centrales cooperativas financieras tienen por objeto realizar operaciones propias de las empresas financieras y se rigen por la Legislación de Empresas Financieras;
4. Las centrales cooperativas de almacenes generales de depósito tienen por objeto establecer almacenes generales de depósito y a expedir certificados de depósito ;warrants; (bonos de prenda) y se rigen por la Legislación de Empresas de Almacenes Generales de Depósitos;
5. Las centrales de cooperativas de ahorro y crédito tienen por objeto realizar operaciones de ahorro y crédito y otras operaciones financieras, y se rigen por la presente Ley.

Artículo 107

El Poder Ejecutivo creará el Instituto Nacional de Financiamiento Cooperativo (INFICOOP), como empresa pública para el fomento, promoción y financiamiento del desarrollo cooperativo, con recursos del Estado y los generados por créditos internos y externos que obtengan con observancia de la Constitución y la Ley con aplicación de las siguientes normas básicas:

1. Las inversiones privadas en la adquisición de los bonos que emita el Instituto Nacional de Financiamiento Cooperativo serán deducibles como gastos para la determinación del Impuesto a la Renta dentro de los límites que al efecto señale el Poder Ejecutivo;
2. El Instituto Nacional de Financiamiento Cooperativo apoyará financieramente al Movimiento Cooperativo Peruano a través de las centrales a que se contrae el Artículo anterior, sin competir con ninguna organización cooperativa;
3. El Directorio del Instituto Nacional de Financiamiento Cooperativo propondrá al Poder Ejecutivo programas de créditos preferenciales para el Sector Cooperativo, a través del sistema bancario. El Banco Central de Reserva otorgará al Instituto Nacional de Financiamiento Cooperativo los mismos beneficios a que se refiere el inc. 9 del Artículo 73 de esta Ley, así como los que tenga el Fondo Nacional de Propiedad Social.
4. El Instituto nacional de Financiamiento Cooperativo por su calidad de institución financiera, podrá realizar todas las operaciones propias de su género y estará bajo la fiscalización de la Superintendencia de banca y Seguros.
5. El Directorio del Instituto Nacional de Financiamiento Cooperativo incluirá a tres delegados del Instituto Nacional de Cooperativas, uno de los cuales será el Director Ejecutivo de éste.

Artículo 108

Las entidades que, sin formar parte del Movimiento Cooperativo Peruano, se propongan realizar actividades de educación cooperativa, u otras acciones de promoción o fomento del Cooperativismo, podrán ser autorizadas, por el gobierno regional que corresponda, para operar como organizaciones de apoyo cooperativo; con aplicación de las siguientes normas básicas:

1. La autorización será conferida sólo a favor de personas jurídicas de fines no lucrativos, constituidas e inscritas en los Registros Públicos con arreglo a ley, a condición de que ellas se obliguen a reinvertir no menos del diez por ciento de sus ingresos brutos y todos los excedentes que generaren sus actividades exclusivamente para la realización de sus fines estatutarios de apoyo cooperativo;
2. Toda organización de apoyo cooperativo iniciará sus actividades como tal, sólo después de obtener la autorización correspondiente del gobierno regional que corresponda, sin perjuicio de la que deba recabar de la autoridad educativa competente si se propusiera realizar programas de calificación profesional extraordinaria, de conformidad con el Artículo 112 de la presente Ley;
3. El gobierno regional que corresponda decretará, previo requerimiento, la cesación de las actividades infractoras del presente Artículo, sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 105 de esta Ley.
4. Están excluidos de las disposiciones del presente Artículo las Universidades y los organismos dependientes del Poder Ejecutivo.

Artículo 109

El Poder Ejecutivo podrá autorizar mediante resolución refrendada por los Ministros de Relaciones Exteriores y de Trabajo y previo informe favorable del Instituto Nacional de Cooperativas, que organizaciones cooperativas federadas internacionales, de las que forme parte la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú y/o las federaciones nacionales de cooperativas, operen en el país, a condición de que sus estatutos y estructura orgánica y funcional sean compatibles con las disposiciones imperativas de la presente Ley y demás normas legales nacionales de orden público.

Artículo 110

Las entidades señaladas a continuación podrán transformarse en cooperativas, con acuerdo de sus asambleas o juntas generales y con observancia de las siguientes normas.

1. Las sociedades mercantiles cuyo patrimonio fuere totalmente asumido por sus propios trabajadores, al amparo de la ley, y cualesquiera otras sociedades cuyos capitales pertenezcan a los trabajadores a su servicio y exclusivamente en cooperativas de trabajadores, de los tipos que les correspondan según sus actividades económicas predominantes;
2. Las asociaciones pro-vivienda y cualesquier otras entidades privadas que tengan por objeto la solución de problemas de vivienda: en cooperativas de vivienda;
3. Las juntas de propietarios de los bienes inmuebles sometidos al régimen legal de la propiedad horizontal; en cooperativas de vivienda, de conformidad con el Artículo 76 (inc. 4);
4. Las derramas y otras organizaciones privadas que tengan por objeto realizar servicios de ahorro, crédito y otras operaciones financieras a favor de sus miembros: en cooperativas de ahorro y crédito;
5. Las asociaciones de socorros y auxilios mutuos; en cooperativas del tipo que ellas elijan, con observancia de los Artículos 7 y 8 de la presente Ley;

6. Otras organizaciones sociales: en cooperativas del tipo correspondiente a sus **finés** económicos predominantes;
7. Las entidades precedentemente citadas quedarán exceptuadas, en su caso, de la obligación establecida por el Artículo 63 del Código Civil, en cuanto se refiere al destino de su patrimonio líquido, siempre que éste sea transferido a la cooperativa resultante de su transformación.

Artículo 111

Todas las organizaciones reguladas por la presente Ley forman el Sector Cooperativo, en este orden:

1. Las organizaciones cooperativas (cooperativas primarias, centrales de cooperativas, federaciones nacionales, las instituciones previstas por el Artículo 106 de la presente Ley y la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú), que, a su vez, constituyen el Movimiento Cooperativo Peruano;
2. Las organizaciones de apoyo cooperativo autorizadas por el Artículo 108 de la presente Ley;
3. Las dependencias nacionales de las organizaciones cooperativas federadas internacionales que se establezcan en el país de conformidad con el Artículo 109 de esta Ley.

Artículo 112

El Ministerio de Educación incorporará la enseñanza y la práctica del Cooperativismo, en todos los niveles de la educación. El Instituto Nacional de Cooperativas brindará a las Universidades, la colaboración que ellas le soliciten con ocasión del funcionamiento de sus programas, institutos, seminarios o cursos de Cooperativismo. En virtud de convenios que el Ministerio de Educación celebre con el Instituto Nacional de Cooperativas, las Escuelas Superiores de Educación Profesional podrán ofrecer especialidades en Cooperativismo para la formación de técnicos en administración cooperativa, y los centros estatales de calificación profesional extraordinaria podrán organizar programas de capacitación cooperativa para dirigentes y trabajadores de organizaciones cooperativas. La autorización para apertura o modificación de centros no estatales de calificación profesional extraordinaria con fines de capacitación cooperativa, o para que ellos ofrezcan programas en esta especialidad, será expedida por la autoridad educativa competente, con sujeción al Reglamento de Calificación Profesional Extraordinaria y previo informe del Instituto Nacional de Cooperativas.

Artículo 113

El Banco de la Vivienda del Perú, el Banco Central Hipotecario del Perú y el Banco de Materiales deberán constituir fondos especiales mediante aportaciones del Gobierno Central y recursos de fuente nacional o exterior, para vigorizar la financiación de programas de vivienda cooperativa, en armonía con el Artículo 76 (incisos 9 y 10) de la presente Ley.

Artículo 114

Las funciones de fomento cooperativo que, por razón de leyes u otras normas especiales, están encomendadas a entidades del Sector Público, serán realizadas por éstas con sujeción a los planes y programas que el Instituto Nacional de Cooperativas y los gobiernos regionales establezcan a nivel nacional y regional, respectivamente. Los referidos planes se adecuarán a los objetivos y metas que en forma prioritaria deberá establecer el Sistema Nacional de Planificación para el más acelerado desarrollo cooperativo dentro de la planificación nacional.

Artículo 115

Todos los organismos integrantes del Sector Público quedan obligados a brindar al Instituto Nacional de Cooperativas, las informaciones, ayuda preferente y otros medios de colaboración que éste les solicite para la eficaz realización de los objetivos de la presente Ley, y a prestar apoyo prioritario a las organizaciones cooperativas.

Artículo 116

Los casos no previstos por la presente Ley se regirán por los principios generales del Cooperativismo, y, a falta de ellos por el derecho común. En materias relativas a la estructura y funcionamiento de las organizaciones cooperativas, son supletoriamente aplicables a éstas, sin perjuicio el párrafo anterior y en cuanto fueren compatibles con los principios generales del Cooperativismo, las normas señaladas a continuación:

1. A las cooperativas primarias y centrales de cooperativas: la legislación de sociedades mercantiles;
2. A las demás organizaciones del Movimiento Cooperativo y a las entidades de apoyo cooperativo: la legislación de las asociaciones no lucrativas de derecho privado.

Artículo 117

Las disposiciones de esta Ley regirán los efectos jurídicos de los actos anteriores en materia cooperativa, si con su aplicación no se violan derechos adquiridos.

Artículo 118

Cualquiera disposición sobre materia cooperativa de alcance nacional, requerirá la opinión previa del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Cooperativas.

Artículo 119

El Poder Ejecutivo dictará, además del Reglamento General de la presente Ley, los reglamentos especiales correspondientes a cada tipo de cooperativa y los que fueren necesarios, en cada caso a propuesta del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Cooperativas. Todas las disposiciones de la presente Ley serán aplicadas con sujeción a su propio texto, sin esperar su reglamentación ni la dación de normas complementarias.

Artículo 120

Los Reglamentos, al regular el funcionamiento de las organizaciones cooperativas, tendrán en cuenta la naturaleza y fines de éstas y los resultados de la experiencia cooperativa nacional, así como las disposiciones relativas a otra clase de personas jurídicas aplicables al Sector Cooperativo, siempre que sean compatibles con los principios generales del Cooperativismo y las disposiciones de la presente Ley.

Artículo 121

Las exenciones, exoneraciones y beneficios tributarios y cualesquiera otros incentivos de que actualmente gozan las organizaciones cooperativas en virtud de normas legales anteriores a la presente Ley y que ella no las incluye expresamente, continuarán en vigencia durante diez años a partir de la fecha de promulgación de ésta, salvo que por efecto de las mismas disposiciones tuvieran una mayor duración o que, por ser inherentes a las entidades cooperativas favorecidas, deban tener vigencia permanente. Las exenciones, exoneraciones y demás beneficios e incentivos tributarios establecidos por la presente Ley regirán durante el mismo plazo de diez años fijados en este Artículo. Igualmente, continuarán en vigencia, durante el plazo previsto en el párrafo anterior, las normas establecidas por el Decreto Ley 22118 en favor de las organizaciones

cooperativas, en todo cuanto fueren compatibles con la presente Ley. Si por ley posterior se sustituyere o modificare el impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio o cualquier otro tributo a que se refiere la presente Ley, las exenciones, exoneraciones y demás beneficios tributarios contenidos en ella incluirán los impuestos que se creen para sustituirlos.

Artículo 122

Las disposiciones de la Ley General de Cooperativas se entenderán suspendidas, modificadas o derogadas solamente por normas legales que así lo establezcan, refiriéndose expresamente a la presente Ley.

Artículo 123

Dése fuerza de Ley al Decreto Supremo No. 023 de 14 de diciembre de 1964, que declaró el 14 de diciembre de cada año como Día del Cooperativismo Peruano.

Artículo 124

El Reglamento contendrá un léxico de los vocablos o frases utilizados en la presente Ley, en cuanto requieran ser explicados. La palabra Reglamento usada en esta Ley tiene, en todo caso, la siguiente significación: REGLAMENTO O REGLAMENTOS DE LA PRESENTE LEY.

Artículo 125

Deróganse o déjense en suspenso, según los casos, todas las leyes y demás disposiciones relativas a la constitución, funcionamiento, control y supervisión de las organizaciones cooperativas y cualesquiera otras que se opongan a la presente Ley.

Artículo 126

La presente Ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de su promulgación, sin perjuicio de las disposiciones siguientes:

1. El régimen de protección establecido por la presente Ley (incluidas las excepciones, exoneraciones y demás beneficios tributarios) regirá a partir de la fecha de vigencia de ella, para todas las organizaciones cooperativas.
2. Tratándose de impuestos de periodicidad anual, los beneficios rigen a partir del ejercicio gravable de 1981;
3. El Artículo 85 de esta Ley, regirá en cuanto limita los alcances del régimen de protección, desde el 1o. de Enero de 1982.

TITULO VIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 127

Los representantes y delegados a que se refiere el Artículo 90 (incisos 1, 2, 4 y 5) del nuevo texto de la Ley General de Cooperativas que antecede, serán designados dentro de los quince días útiles siguientes a la fecha de promulgación de esta Ley, al término los cuales se instalará el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Cooperativas con el personal expedito a esa fecha. El Presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú será incorporado inmediatamente después de que acredite su personería con arreglo a Ley.

Artículo 128

La Dirección General de Cooperativas del Ministerio de Trabajo pondrá término a sus funciones en la fecha en que preste juramento el primer Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Cooperativas.

Artículo 129

Transfiérase a favor del Instituto Nacional de Cooperativas al personal y los recursos materiales y presupuestales de la Dirección General de Cooperativas del Ministerio de Trabajo a que se refiere el Decreto Legislativo No. 62 del 27 de marzo de 1981.

Artículo 130

Los bienes que entre 1963 y 1978 pertenecieron a los extinguidos organismos de supervisión cooperativa (antiguo Instituto Nacional de Cooperativas, Oficina Nacional de Desarrollo Cooperativo y Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social) y que fueron entregados a los organismos a que se refiere el Artículo 2o. del Decreto Ley No. 22088, serán transferidos por éstos, antes del 1o. de enero de 1982 al Instituto Nacional de Cooperativas que se restablece mediante la presente Ley.

Artículo 131

El Poder Ejecutivo someterá al Congreso, dentro de los quince días posteriores a la promulgación de la presente Ley, el proyecto de ley respectivo sobre modificación de la Ley de Presupuesto No. 23233 para la apertura del Pliego correspondiente al Instituto Nacional de Cooperativas (INCOOP).

Artículo 132

El Reglamento previsto en el Artículo 9 (inciso 2) de la presente Ley será dictado dentro de los ciento ochenta días posteriores a la fecha de promulgación de ésta. Para tal efecto, el Proyecto de dicho Reglamento será elaborado por una Comisión Especial formada por representantes del Poder Ejecutivo, nombrados mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Trabajo e integrada por los siguientes delegados designados por éste mediante Resolución Ministerial: uno propuesto por el Instituto Nacional de Cooperativas y el otro, por la Comisión Reactivadora de la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú.

Artículo 133

Las organizaciones cooperativas aún no integradas a sus federaciones o a la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú, si esta se constituyere, según los casos, quedan comprendidas en el Régimen de Protección establecido por la presente Ley, a partir de la fecha de vigencia de ésta. Pero desde el 1o. de enero de 1982, quedarán necesariamente sometidas a los efectos del Artículo 85 de esta misma Ley.

Artículo 134

Las organizaciones cooperativas y las entidades que sin formar parte del Movimiento Cooperativo Peruano realizan actividades de apoyo cooperativo y cuya estructura orgánica o funcional no guarde conformidad con la presente Ley, la adecuarán a sus disposiciones y solicitarán la reinscripción de sus nuevos estatutos en el Registro de Personas Jurídicas, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de promulgación de ella y sin perjuicio, en cuanto les respecte, de las normas siguientes:

1. De conformidad con los Artículos 7 y 8 del nuevo texto de la Ley General de Cooperativas:

- 1.1 Las cooperativas agrarias de producción, las cooperativas comunales de producción; y las cooperativas de producción y trabajo; adoptarán la modalidad de cooperativas de trabajadores; y se adecuarán a los tipos empresariales que les correspondan;
- 1.2. Las cooperativas de servicios; y las cooperativas de servicios múltiples; se adecuarán a los tipos empresariales que les correspondan, en función de sus actividades económicas predominantes;
2. El plazo establecido por el presente Artículo podrá ser prorrogado mediante resolución del Instituto Nacional de Cooperativas;
3. Vencido el plazo fijado por el presente Artículo o su prórroga si fuere el caso el Instituto Nacional de Cooperativas ordenará la cancelación de las inscripciones de las entidades que no le dieran cumplimiento;
4. Las inscripciones de las organizaciones cooperativas inexistentes según el Censo Nacional de Cooperativas a que se refiere el Decreto Supremo No. 08-91-TR, expedido el 20 de marzo de 1981, serán canceladas en los Registros Públicos, a pedido del Instituto Nacional de Cooperativas;
5. Las inscripciones en los Registros Públicos a que dé lugar el cumplimiento del presente Artículo se harán en forma gratuita;
6. En los demás casos no previstos por el presente Artículo, la adecuación que corresponda será normada mediante resolución del Instituto Nacional de Cooperativas.

Artículo 135

Para los fondos irrepartibles que las cooperativas hubieran acumulado por cualquier causa, hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, regirán las siguientes normas:

1. El fondo de reserva, el fondo cooperativo, el fondo de inversiones, el fondo de desarrollo cooperativo; y cualquier otro similar, se convertirán automáticamente en ;reserva cooperativa, de conformidad con el Artículo 43 de la presente Ley, a partir de la fecha de vigencia de ésta;
2. La asamblea general podrá aplicar, antes del 1o. de julio de 1982, los saldos de sus fondos de educación y de previsión social, a cualesquiera de los fines previstos en el inciso 1.2 del Artículo 42 de la presente Ley;
3. Si la asamblea general no ejercitare oportunamente la facultad prevista en el inciso anterior, los fondos señalados en éste pasarán a integrar automáticamente, a partir del 1o. de julio de 1982, la reserva cooperativa, de conformidad con el mismo Artículo 42o. antes citado;
4. Si la cooperativa se disolviere antes del 1o. de julio de 1982, los fondos previstos en el inciso 2 del presente Artículo serán considerados como ;reserva cooperativa; para todos los efectos de la liquidación.

MODIFICAN EL “REGLAMENTO DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO NO AUTORIZADAS A OPERAR CON RECURSOS DEL PUBLICO”.

- **RESOLUCIÓN SBS N° 621-2003.**

Lima, 20 de mayo del 2003.

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y SEGUROS

CONSIDERANDO:

Que, en uso de las facultades establecidas en los numerales 7 y 9 del artículo 349º, así como en la Vigésimo Cuarta Disposición Final y complementaria de la Ley General del

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros – Ley N° 26702, mediante Resolución SBS N° 540-99 de fecha 15 de junio de 1999, se aprobó el “Reglamento de las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar con recursos del público”.

Que, mediante Resolución de fecha 15 de octubre de 2002 de la Sala de Derecho Constitucional y social de la Corte Suprema de Justicia de la República, se han declarado inaplicables, con efectos generales, total o parcialmente, determinados artículos del citado reglamento;

Que, es necesario efectuar modificaciones al “Reglamento de las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar con recursos del público”, a efectos de adecuarlo a la sentencia mencionada en el considerando anterior; y,

Estando a lo opinado por las Superintendencias Adjuntas de Banca y de Asesoría Jurídica, así como por la Gerencia de Estudios Económicos, y en uso de las facultades establecidas en los numerales 7 y 9 del artículo 349^a, así como en la Vigésimo Cuarta Disposición final y Complementaria de la citada Ley General;

RESUELVE :

Artículo Primero.- Derogar el literal l) del artículo 39°, artículos 29° al 32°, artículos 49° al 53°, el artículo 60° y la Octava Disposición Transitoria del “Reglamento de las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar con recursos del público” aprobado mediante Resolución SBS N° 540-99, y sustituir los artículos 3°, 4°, 5°, 11°, 14°, 18°, 21° y 57° del citado Reglamento, conforme a los textos que se indica a continuación:

Artículo 3°.- Inscripción

Las Cooperativas podrán operar válidamente sólo después de su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas, estando sujeto a los procedimientos y normas de constitución e inscripción señaladas en la Ley.

Las cooperativas deberán comunicar a la Federación su inscripción en los Registros Públicos, en un plazo no mayor de quince (15) días de realizada, acompañando copia certificada del acta de constitución y aprobación de su estatuto, y la constancia de inscripción.

Artículo 4°.- Estatutos.

Las modificaciones al estatuto de las cooperativas se deben realizar conformme a lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley, debiendo las cooperativas comunicar dichas modificaciones a la Federación, en un plazo no mayor de quince (15) días de efectuada la inscripción, para lo cual adjuntarán copia certificada del acta en la que conste la modificación de estatuto y la respectiva constancia de inscripción.

Artículo 5°.- Operaciones y servicios autorizados.

Las Cooperativas solo pueden operar válidamente con sus asociados, estando facultadas a realizar, conforme a la naturaleza del tipo de Cooperativas señalado en el numeral 2.11 del artículo 7° de la Ley, las siguientes operaciones:

- a) Recibir depósitos de sus asociados.
- b) Otorgar a sus asociados créditos directos con arreglo a las condiciones que señale el respectivo reglamento de créditos de la Cooperativa.
- c) Otorgar avales y fianzas a sus asociados, a plazo y monto determinados.

- d) Adquirir, conservar y vender acciones y bonos que tengan cotización en bolsa, emitidos por sociedades anónimas establecidas en el país, así como certificados de participación en Fondos Mutuos y Fondos de Inversión. Asimismo podrá ser socia de otras cooperativas, así como adquirir acciones o participaciones en sociedades que tengan por objeto brindar servicios a sus asociados o tengan compatibilidad con su objeto social, no siendo necesario en estos casos que las acciones o participaciones se encuentren cotizadas en bolsa.
- e) Recibir líneas de créditos de entidades nacionales o extranjeras.
- f) Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el desarrollo de sus actividades.
- g) Efectuar operaciones de crédito con otras cooperativas o empresas del sistema financiero.
- h) Brindar servicios de caja y tesorería a sus asociados.
- i) Efectuar depósitos en instituciones financieras o en otras entidades del sistema cooperativo de ahorro y crédito de las cuales sean asociadas.

Asimismo, las cooperativas podrán realizar otras operaciones y servicios diferentes a las operaciones propias del tipo de cooperativa antes señalado, a condición que éstas sean sólo actividades accesorias o complementarias y se realicen en los términos establecidos en el numeral 9 del artículo 8º de la Ley, sin que ello signifique el cambio del tipo u objeto social de la Cooperativa.

Artículo 11º.- Impedimentos.

No pueden ejercer las funciones de dirigentes o directivos ni de gerentes de las cooperativas, aquellos que se encuentran incursos en los impedimentos señalados en el numeral 3 del artículo 33º de la Ley.

Asimismo conforme lo señalado en el numeral 8 de la Vigésima Cuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley General, no podrán ser elegidos ni nombrados directivos y funcionarios, respectivamente, de las cooperativas y centrales de cooperativas de ahorro y crédito, quienes hubieren sido encontrados responsables administrativa o penalmente por actos de mala gestión.

Artículo 14º.- Adecuado ejercicio de atribuciones.

LA Asamblea, en uso de la atribución señalada en el numeral 1 del artículo 27º de la Ley y para el adecuado cumplimiento de la responsabilidad que le asigne el numeral 2 de la Vigésima Cuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley General, es responsable de que los estatutos de la Cooperativa contengan disposiciones para el adecuado ejercicio de las atribuciones de los miembros de los Consejos, racionalidad en la asignación de dietas, quórum, periodicidad de las sesiones y demás aspectos señalados en el artículo 33º de la Ley y el presente Reglamento.

Artículo 18º.- Consejo de Vigilancia.

Para el adecuado cumplimiento de la función de control señalada en el numeral 2 de la Vigésima Cuarta Disposición Final y complementaria de la Ley General, así como de las atribuciones de fiscalización señaladas en el numeral 7 del artículo 31º de la Ley, relacionada con la facultad de disponer auditorías, el Consejo de Vigilancia es responsable de la adecuada implementación de cifras auditorías, tomando en consideración las normas emitidas sobre la materia por la Superintendencia.

Artículo 21º.- Capital y Aportes.

El capital social de las cooperativas se constituye con las aportaciones de los asociados. El capital social inicial y la suma mínima que un socio debe pagar a la cuenta de

aportaciones que suscriba, lo señala el estatuto de la cooperativa. Dicha suma mínima podrá considerar las características de capital variable y derecho de retiro del socio establecidas en el numeral 2.5 del artículo 5º y artículos 23º y 38º de la Ley.

El documento utilizado para acreditar los aportes de los asociados, deberá contener una descripción de la naturaleza de los mismos, diferenciándola claramente de los depósitos de los asociados.

Artículo 57º.- Equipo de Supervisión.

La Federación debe adoptar las medidas necesarias para realizar en forma independiente y eficiente la función de Supervisión que le asigne el numeral 3 de la Vigésimo Cuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley General. Dicha función debe ser ejercida por una unidad organizacional debidamente diferenciada que cuente con los profesionales idóneos para el desarrollo de dicha función, así como con la infraestructura y recursos que establezca el órgano competente de la Federación conforme a su Estatuto.

El encargado de la citada unidad organizacional y el personal del equipo de supervisión a cargo de éste deben ser personal que reúnan condiciones de idoneidad profesional y moral, así como tener experiencia adecuada para el desarrollo de dichas funciones.

La designación y remoción del encargado de dicha unidad debe ser comunicada por la Superintendencia dentro de los cinco días posteriores de su ocurrencia, adjuntando el correspondiente currículum vitae en el caso de designación, así como indicando las razones que sustenten la separación en el caso de remoción.”

Artículo Segundo.- La presente Resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN JOSE MARTHANS LEON

Superintendencia de Banca y Seguros.

Norma Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22 de Mayo del 2003.

4.29. PUERTO RICO

LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

LEY N° 50/994

(del 4 de agosto de 1994)

Exposición de motivos:

La Ley Núm 291 de 9 de abril de 1946, conocida como la «Ley General de Sociedades Cooperativas», ha servido de base para lo que hoy conocemos como el Movimiento Cooperativo Puertorriqueño. Esta ley fue promulgada para estimular actividades de producción y de servicios a través de la atractiva estructura cooperativa. Actualmente rige cooperativas de consumo, vivienda, agricultura, transportación y otras. Quedan fuera de la aplicación directa de esta ley los sectores de crédito y de seguros, que en la actualidad constituyen los principales sectores del cooperativismo puertorriqueño, y que se rigen por leyes especialmente promulgadas para esos fines.

Durante los pasados 47 años la Ley General de Sociedades Cooperativas ha sido objeto de aproximadamente 130 enmiendas a sus artículos. Las enmiendas mencionadas han tenido el efecto de interrumpir la lectura lógica de esa ley, que en la actualidad se nos

presenta fragmentada por las adiciones insertadas en su redacción original. Como consecuencia, a los socios de las cooperativas les resulta difícil poder entender la ley y utilizarla para aplicarla a su institución. La actual revisión general de esta ley debe servir para hacerla accesible al lector promedio y por ende, para contribuir al crecimiento y desarrollo del cooperativismo.

La presente revisión de la «Ley General de Sociedades Cooperativas» también pretende agilizar y liberalizar la estructura que rige sobre las cooperativas de producción y de servicios no financieros de acuerdo con las tendencias modernas mundiales, de forma que esta ley resulte atractiva para los grupos interesados en incorporarse para actividades no financieras, y para que éstos puedan operar sin mayores contratiempos.

Actualmente, a un grupo interesado en formar una cooperativa se le requiere un estudio de viabilidad que tarda de tres a seis meses y que debe ser realizado por la Administración de Fomento Cooperativo. El grupo interesado también debe someter las cláusulas de incorporación y el reglamento interno para que sean evaluados por la Oficina del Inspector. La presente ley libera a la Administración de Fomento Cooperativo de la obligación de realizar esos estudios de viabilidad al disponer que dichos estudios puedan ser realizados por economistas particulares o por otros organismos del movimiento cooperativo. También dispone que la Oficina del Inspector de Cooperativas tendrá un término máximo de 45 días para resolver a favor o en contra de una solicitud de incorporación una vez reciba dicho estudio, y que los grupos interesados puedan comenzar sus operaciones bajo el título de «cooperativas en formación».

La presente ley incorpora, otros reclamos del propio movimiento cooperativo, así como las sugerencias contenidas en la «Ley Marco», documento guía que fue recientemente redactado por distinguidos especialistas en el derecho cooperativo de la Organización Cooperativa de América. Entre las sugerencias de esta obra, destinada a servir de modelo para las legislaciones cooperativas del continente, se encuentra la necesidad de crear instituciones de «segundo nivel», o instituciones cooperativas creadas e integradas por las propias cooperativas como únicas socias de las mismas.

Conocidas por «centrales cooperativas», estas instituciones de segundo nivel, sirven para que las cooperativas existentes puedan, en conjunto, crear nuevas instituciones de servicios. Aunque ya existen ejemplos de «centrales», como son las prestigiosas cooperativas de seguros, éstas responden al «Código de Seguros», mientras que la actual «Ley General» no provee para la creación de «centrales».

La presente «Ley General de Sociedades Cooperativas» tiene el propósito de agilizar y liberalizar la estructura cooperativa de acuerdo con las tendencias mundiales modernas, de forma que contribuya al desarrollo de las cooperativas que actualmente operan y que a su vez, resulte atractiva para la formación de nuevas cooperativas.

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

Sección 1

Adoptar una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas:

Sub-título. Disposiciones Particulares

PARTE I

Disposiciones Preliminares

CAPITULO I Título, Objetivo y Definiciones

Artículo 1.0.

Título

Esta ley se denominará «Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico».

Artículo 1.1.

Objetivo de la Ley

El objetivo de la presente Ley es dotar a las cooperativas y al sector cooperativo en general de un marco jurídico para su organización, funcionamiento y regulación.

Artículo 1.2.

Definiciones

- a) acciones, significará las aportaciones, cuotas o partes del capital social de la cooperativa.
- b) asamblea generales, significará las reuniones de la cooperativa, compuestas por socios o delegados de éstos, que ejercen la máxima autoridad de la cooperativa.
- c) auspiciar, significará patrocinar la formación de otra cooperativa de acuerdo con las disposiciones de esta ley.
- d) cooperativa, para los efectos de esta ley, significará toda institución organizada de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, y excluye las instituciones cooperativas organizadas y reguladas de acuerdo con otras leyes.
- e) central, significará una entidad con fines económicos, constituida por cooperativas socias.
- f) cláusulas, significará el documento principal constitutivo de la cooperativa, el cual se denomina «cláusulas de incorporación».
- g) departamento, significará una actividad comercial organizada por la cooperativa no relacionada con sus fines y propósitos originales.
- h) Inspector, significará la Oficina del Inspector de Cooperativas de Puerto Rico
- i) junta, significará la junta de directores de una cooperativa.
- j) mora, significará el incumplimiento o cumplimiento tardío de las responsabilidades
- k) oficial, significará aquel miembro de la junta que haya sido designado para una posición específica en dicha junta.
- l) operación, significará la siembra, cultivo, extracción, recibo, almacenamiento, industrialización, manufactura, utilización, compra, venta, reparación, o cualquier otra forma de manejar artículos o mercancía.
- m) patrocinio, significará aquella proporción del volumen total de negocios o servicios de la cooperativa que haya generado, realizado, rendido o recibido un socio.
- n) persona, significará para propósito de esta ley: (1) toda persona natural, (2) toda cooperativa organizada de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, (3) cualquier asociación o persona jurídica sin fines de lucro inscrita bajo las leyes de Puerto Rico.
- ñ) reglamento, significará el reglamento interno de una cooperativa.
- o) reserva social, significará la reserva especial establecida por toda cooperativa para cualquier eventualidad o contingencia.
- p) servicio, significará toda gestión de naturaleza lícita que podrá prestarse u obtenerse por una cooperativa para sí, sus socios y otros patrocinadores; incluye la provisión de fondos; recibir y hacer préstamos, depósitos e inversiones; y organizar actividades de índole educacional y comercial.
- q) socio, significará toda persona natural o persona jurídica sin ánimo de lucro que pertenezca a una cooperativa
- r) tipo, significará la actividad o propósito principal de una cooperativa.

CAPITULO 2 Política Pública

Artículo 2.0.

Autonomía

El Estado garantiza el libre desenvolvimiento y la autonomía de las cooperativas, y en armonía buscará la forma y manera de ayudar, estimular, desarrollar, promover y dar apoyo al movimiento cooperativo.

Artículo 2.1.

Igualdad de Derechos

El Estado garantiza que las cooperativas gozarán de todas las facultades y prerrogativas que la ley les concede a otras personas jurídicas y que no se establecerán restricciones que sean discriminatorias o exigencias adicionales para éstas.

Artículo 2.2.

Derecho Aplicable

Las cooperativas organizadas de acuerdo a esta ley se regirán por sus disposiciones y, en general, por el Derecho cooperativo. Supletoriamente se regirán por el derecho que les sea aplicable en cuanto sea compatible con su naturaleza.

Artículo 2.3.

Derecho Cooperativo

Derecho Cooperativo es el conjunto de normas especiales, jurisprudenciales, doctrinas y prácticas basadas en los principios que determinan y condicionan la actuación de las entidades cooperativas y los sujetos que en ellas participan.

Artículo 2.4.

Actos Cooperativos

Son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y sus socios o por las cooperativas entre sí y con el Estado en cumplimiento de su objetivo social y quedar sometidas al Derecho Cooperativo.

CAPITULO 3

Personalidad Jurídica

Artículo 3.0.

Concepto

Las cooperativas son personas jurídicas privadas de interés social fundadas en la solidaridad y el esfuerzo propio para realizar actividades económico-sociales con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, sin ánimo de lucro.

Artículo 3.1.

Principios

Las cooperativas deben observar los siguientes principios:

- a) Libre adhesión y retiro voluntario de los socios.
- b) Participación democrática.
- c) Limitación al interés pagado a los socios por sus aportaciones.
- d) Distribución no lucrativa del excedente y en proporción al patrocinio.
- e) Fomento de la educación cooperativa.
- f) Participación en la integración cooperativa.

Artículo 3.2.

Características

Las cooperativas deberán ser consistentes con las siguientes características:

- a) Plazo de duración indefinido.
- b) Variabilidad e ilimitación del capital.
- c) Independencia político-partidista.
- d) Igualdad de derechos y obligaciones entre los socios.
- e) Reconocimiento de un solo voto a cada socio de las cooperativas de primer grado.

- f) Irrepartibilidad de las reservas sociales.
- g) No negar admisión como socio a persona alguna por consideración de raza, sexo, color, jerarquía social, creencia religiosa, ciudadanía o afiliación política.
- h) Propósitos no lucrativos.
- i) Promover el desarrollo económico y social mediante el esfuerzo común.

Artículo 3.3.

Fines y Propósitos de la Cooperativa

Las cooperativas conforme su naturaleza, pueden ser trabajadores, consumidores, usuarios y mixtas, y dedicarse a servicios o producción, o a ambas actividades.

Artículo 3.4.

Facultades

Toda cooperativa organizada de acuerdo con las disposiciones de esta ley, es una persona jurídica. Podrá realizar toda clase de actividad lícita que sea propia o incidental a la consecución de sus fines y propósitos y en pie de igualdad con los otros sujetos de derechos privado.

Artículo 3.5.

Poderes Específicos

Sin considerarse de forma limitativa, toda cooperativa podrá: a) Realizar sus actividades en o fuera de Puerto Rico, según lo permitan las leyes b) Poseer sello propio y alterarlo mediante acuerdo de la junta c) Demandar y ser demandada d) Celebrar todo tipo de contrato legal e) Aceptar donaciones, siempre que no contengan condiciones que limiten sus facultades para actuar f) Adquirir, poseer, vender, disponer, permutar, hipotecar, tomar o ceder en arrendamiento, y en cualquier otra forma operar con bienes muebles e inmuebles g) Adquirir, emitir, endosar, descontar, vender o en otra forma operar con comprobantes de deuda, bonos, obligaciones y valores h) Establecer y acumular reservas y superávit de capital, e invertir tales reservas y superávit en otras propiedades y valores i) Tomar dinero a préstamo sin limitación de cuantía j) Actuar como agente, representante o apoderado de cualquier socio k) Conceder anticipos a sus socios, y a socios de otra cooperativa que sea a su vez socia o subsidiaria de la concedente, sobre mercancías entregadas o servicios rendidos l) Limitar sus operaciones, actividades y servicios exclusivamente a sus socios, o hacer extensivas las mismas a no-socios m) Servir como auspiciadoras de otras cooperativas n) Dedicarse a más de una actividad ñ) Ampliar sus actividades mediante la creación de departamentos definidos en sus cláusulas o) Establecer y acumular reservas sociales para beneficio de sus socios o comunidad, para casos de emergencia o desastres naturales, conforme a los criterios que establezca el reglamento interno de la cooperativa p) Disolverse, liquidarse, fusionarse o consolidarse dentro del marco de la presente ley.

Artículo 3.6.

Denominación

El nombre de toda cooperativa debe incluir el vocablo «Cooperativa» o «Coop» y la palabra o abreviatura que identifica su actividad principal. Queda prohibido el uso de la denominación «Cooperativa», o de palabra o símbolo que pudiera dar la impresión de que se trata de una cooperativa, por persona o entidad que no esté organizada de acuerdo con las disposiciones de esta ley.

Artículo 3.7.

Cooperativas en Formación

Serán cooperativas en formación aquéllas que habiendo iniciado el procedimiento con la presentación de los documentos constitutivos, todavía no aparecen inscritas en el Departamento de Estado. El período de formación no podrá ser mayor de un año, contado desde la fecha de la radicación de las cláusulas, el reglamento y un estudio de viabilidad económica ante el Inspector de Cooperativas. Durante ese período, que podrá prorrogarse de mediar justa causa, llevarán como parte de su nombre las palabras «en formación», y estarán facultadas para realizar actos frente a terceros, pero los incorporadores serán responsables personal y solidariamente por los actos frente a terceros.

Artículo 3.8.

Entidades Transformándose en Cooperativas

Las sociedades y corporaciones en proceso de transformarse en cooperativas, por iniciativa de sus trabajadores o usuarios, tendrán los mismos derechos y obligaciones que las cooperativas en formación.

Artículo 3.9.

Relación con Otras Entidades

La cooperativa podrá ser dueña de acciones de otras cooperativas, corporaciones o entidades, siempre y cuando la relación sea conveniente para sus propósitos legales, el propósito no sea meramente lucrarse, y las otras entidades le permitan ejercer todo derecho de socio o accionista.

PARTE II

Constitución y Reconocimiento

CAPITULO 4

Formación de la Cooperativa

Artículo 4.0.

Número de Personas Requeridas

Cinco (5) o más personas domiciliadas en Puerto Rico podrán incorporar una cooperativa, siempre que cumplan con las disposiciones de esta ley.

Artículo 4.1.

Asamblea Constitutiva

Los interesados deberán celebrar una asamblea en la cual consideren y aprueben las cláusulas de incorporación y el reglamento interno de la cooperativa, y elijan una junta de directores y un comité de supervisión.

Artículo 4.2.

Requisitos Constitutivos

Todo grupo que interese organizarse como cooperativa tramitará los documentos necesarios para su incorporación ante la Oficina del Inspector de Cooperativas de Puerto Rico. Estos documentos son las cláusulas, el reglamento y un estudio de viabilidad económica.

Artículo 4.3.

Contenido de las Cláusulas

Las cláusulas de incorporación de toda cooperativa deberán incluir:

- a) El nombre, que deberá acompañar a la palabra «cooperativa» o una abreviatura de la misma; no podrá ser uno que pueda confundirse con el de otra cooperativa, federación, liga, asociación o corporación organizada o que realice negocios en Puerto Rico.
- b) Objetivos, fines o propósitos para los que se organiza.
- c) La dirección exacta donde se establecerá la oficina principal de la cooperativa.
- d) Nombre, dirección y circunstancias personales de los incorporadores, así como el número de acciones suscritas por cada uno de ellos.
- e) La cuantía de capital con que la cooperativa comenzará operaciones, si se resolviera tenerlo.
- f) Organización y funciones de la asamblea, la junta de directores, y el comité educativo y el de supervisión.
- g) El valor y los derechos que acompañan las aportaciones o acciones, sean éstas comunes o preferentes, la distribución de los excedentes, y la formación de reservas.
- h) El número de socios con que la cooperativa comenzará sus operaciones; las condiciones de ingreso, retiro y expulsión de socios y sus derechos y obligaciones.
- i) Normas sobre enmiendas a las cláusulas, disolución y liquidación.
- j) Cualquier otra disposición que regule la administración de los asuntos, negocios, actividades o servicios de la cooperativa, siempre que esté en armonía con la presente ley.

Artículo 4.4.

Contenido del Reglamento

Los incorporadores o socios de la cooperativa deberán aprobar al momento de la asamblea constitutiva, un reglamento interno de la cooperativa que especifique las disposiciones contenidas en las cláusulas de incorporación y contenga aquellas otras disposiciones que sus socios consideren convenientes para el mejor funcionamiento de la cooperativa, siempre que no contradigan lo dispuesto en las cláusulas de incorporación y la presente ley. Sin que se entienda de forma limitativa, el reglamento podrá contener:

- a) La fecha, lugar y manera de convocar y celebrar asambleas ordinarias y extraordinarias de socios, y los requisitos para que los socios puedan incluir temas en la agenda de la asamblea.
- b) La forma de votar y las condiciones bajo las cuales los socios podrán votar en asamblea ordinaria y extraordinaria, general o de distrito.
- c) La organización de la cooperativa por distritos, y las calificaciones, obligaciones y términos de los delegados electos por los distritos.
- d) El número, calificaciones, poderes, facultades, obligaciones, y términos de los directores y de los funcionarios.
- e) La fecha, sitio y manera de constituirse en junta, y convocar y celebrar reuniones de directores y, de haberlo, del comité ejecutivo.
- f) La destitución, renuncia o sustitución de un director o funcionario.
- g) La condición de socio; los requisitos precedentes a la condición de socio, la forma de determinar y de pagar al socio su interés en la cooperativa al ocurrir su muerte, retiro, separación u otra circunstancia que le haga cesar en su condición de socio; las condiciones y fechas en que cualquier miembro dejará de serlo; la forma y efecto de la suspensión y expulsión de un socio.
- h) Las condiciones o términos para efectuar retiros y transferencias de aportaciones o acciones.
- i) Las funciones y deberes que se podrán delegar a un funcionario ejecutivo de la cooperativa.
- j) La forma en que las economías netas de la cooperativa puedan ser distribuidas a socios. La forma en que la cooperativa habrá de relacionarse con no socios.

- k) Las penalidades por infracciones al reglamento interno, y el procedimiento para radicar querellas.
- l) Normas sobre integración cooperativa.

Artículo 4.5.

Estudio de Viabilidad

El grupo interesado en formar una cooperativa debe realizar un estudio económico que muestre la viabilidad o capacidad de éxito de la empresa que proyectan establecer. Dicho estudio podrá realizarse por la Administración de Fomento Cooperativo, la Liga de Cooperativas, el Banco Cooperativo, la Federación de Cooperativas a la cual pudieran pertenecer o por cualquier profesional debidamente cualificado.

CAPITULO 5

Reconocimiento Oficial

Artículo 5.0.

Presentación de Documentos Constitutivos

Para iniciarse el trámite de incorporación ante el Inspector, se presentarán ante éste el original y dos (2) copias de las cláusulas y el reglamento, acompañados de un estudio de viabilidad económica y el comprobante de rentas internas por la suma dispuesta en esta Ley para fines del registro en el Departamento de Estado.

Artículo 5.1.

Examen de Documentos Constitutivos

El Inspector examinará los documentos constitutivos y si cumplen con todos los requisitos de esta ley y ninguna de sus disposiciones está en contradicción con las leyes de Puerto Rico, someterá los mismos al Secretario de Estado dentro del término prescriptivo de cuarenta y cinco (45) días hábiles desde la fecha de radicación de éstos en la oficina del inspector.

Artículo 5.2.

Objeciones Legales

El Inspector podrá negarse a someter las cláusulas para su registro cuando el grupo interesado en organizar la cooperativa no cumple con los requisitos que establece la ley, siempre que dentro del término establecido notifique a las personas interesadas de las deficiencias encontradas y exponga las razones de su negativa.

Artículo 5.3.

Silencio

En caso de que el Inspector no haya realizado su función dentro del término indicado, los incorporadores podrán someter los documentos directamente al Departamento de Estado, que luego de reconocer el debido cumplimiento con la ley, radicará los documentos y expedirá el correspondiente certificado de incorporación.

Artículo 5.4.

Registro

La cooperativa quedará debidamente constituida cuando el Departamento de Estado registre sus cláusulas y emita el correspondiente certificado de registro.

Artículo 5.5.

Comienzo de Actividades

La cooperativa podrá comenzar sus operaciones oficialmente cuando el Departamento de Estado haya registrado sus cláusulas de incorporación. El Inspector enviará el certificado de registro y dos copias de las cláusulas y del reglamento, a toda cooperativa debidamente constituida.

Artículo 5.6.

Convalidación de Actos

Los actos celebrados y los documentos suscritos a nombre de la cooperativa antes de su constitución legal, podrán ser convalidados si los ratifica la primera asamblea general de socios que posteriormente se celebre.

CAPITULO 6

Enmiendas a las Cláusulas y al Reglamento

Artículo 6.0.

Enmienda de Cláusulas y Reglamentos

Las cláusulas de incorporación y el reglamento interno de la cooperativa podrán ser enmendados en cualquier asamblea general ordinaria, o en cualquier asamblea general extraordinaria convocada para tales efectos. Las enmiendas deberán aprobarse por el voto de dos terceras (2/3) partes de los socios presentes, o por dos terceras (2/3) partes de los delegados presentes en las cooperativas organizadas por distritos.

Artículo 6.1.

Notificación a los Socios

Las enmiendas propuestas deberán ser notificadas por la junta de directores a todos los socios o delegados, según el caso, con no menos de diez (10) días de anticipación a la asamblea. En las cooperativas organizadas por distritos, la junta de directores deberá notificar a todos los socios las enmiendas propuestas y proveerles la oportunidad para que discutan las mismas.

Artículo 6.2.

Aprobación del Inspector

El original y dos copias de las enmiendas a las cláusulas de incorporación o al reglamento, certificados por el Secretario de la cooperativa, deberán ser enviados al Inspector. Dichas enmiendas entrarán en vigor una vez aprobadas por el Inspector, que tendrá un término prescriptivo de cuarenta y cinco (45) días desde la radicación de los documentos en su Oficina para notificar a la cooperativa interesada la aprobación o denegación de las mismas de acuerdo con las disposiciones de esta ley, y las razones de la denegación en caso de haberla.

Artículo 6.3.

Silencio

En caso de que el Inspector no realice su función dentro del término indicado, los interesados podrán someter los documentos directamente al Departamento de Estado, para que el Secretario reconozca que los documentos cumplen con los requisitos de ley y en consecuencia expida el certificado correspondiente.

PARTE III

SOCIOS

CAPITULO 7

Admisión

Artículo 7.0.

Matrícula de una Cooperativa

La persona se convierte en socio de una cooperativa mediante su participación en el acto de incorporación o por resolución de la Junta aceptando su admisión a petición del interesado.

Artículo 7.1.

Requisitos

Para ser socio de una cooperativa se requiere:

- a) Tener capacidad legal.
- b) Reunir los requisitos de esta ley, las cláusulas y el reglamento de la cooperativa.

Artículo 7.2.

Condiciones de Ingreso

La Junta de Directores de una cooperativa no podrá negar la admisión como socio a persona alguna por consideración de raza, sexo, jerarquía social, creencia religiosa, ciudadanía o afiliación política. Tendrá facultad para denegar la admisión a personas que a su juicio no contribuyan a la mejor realización de los fines que la cooperativa persigue.

Artículo 7.3.

Rechazo de Solicitud; Revisión

Si una solicitud de admisión fuese rechazada por la junta de directores, el solicitante tendrá derecho a solicitar a la junta que reconsidere su decisión. Si la junta se reafirma en su negativa y el solicitante entiende que la decisión de la junta es contraria a la ley o a las cláusulas, podrá radicar una petición de revisión ante el comité de supervisión exponiendo los fundamentos para dicha petición.

Si el comité de supervisión ratifica la decisión de la junta, la decisión del comité será final y firme. Si la decisión del comité es contrario al de la Junta, el asunto debe ser traído ante la consideración de la próxima asamblea de socios, la cual decidirá al respecto.

Artículo 7.4.

Registro de Socios y Afines

Las cooperativas llevarán y mantendrán actualizado un registro de socios, el cual contendrá la siguiente información:

- a) Nombre, dirección y ocupación de cada uno de los socios, debiendo verificar las credenciales de identidad de tales socios.
- b) Cantidad de acciones que posea cada socio, con su correspondiente numeración, cuando estén enumeradas, y la suma pagada por tales acciones.
- c) La fecha exacta del ingreso del socio a la cooperativa.
- d) La fecha en que el socio deje de pertenecer a la cooperativa y la razón para ello.

Las cooperativas también llevarán y mantendrán un registro de las personas o entidades que reciban servicios de la cooperativa.

CAPITULO 8

Derechos y Obligaciones

Artículo 8.0.

Aceptación de Condiciones Precedentes

Todos los socios aceptarán las obligaciones contraídas por la cooperativa antes de su ingreso a la misma.

Artículo 8.1.

Votación

Todo socio tendrá derecho a emitir un solo voto irrespectivamente de su interés, número de acciones o aportaciones a la cooperativa. Se prohíbe el voto por apoderado, excepto para la determinación de quórum en una segunda convocatoria de asamblea general ordinaria.

Artículo 8.2.

Inspección de Libros

Prevía solicitud escrita, cualquier socio podrá inspeccionar los libros y registros de su cooperativa, en la oficina principal de ésta durante horas razonables que no perjudiquen o interrumpan los negocios, actividades y servicios de la cooperativa. Los documentos abiertos a inspección no incluyen archivos o expedientes personales de empleados o socios. Cualquier solicitud denegada puede ser apelada al comité de supervisión, y por mediación de éste, al Inspector de Cooperativas.

Artículo 8.3.

Derechos

Además de todos los derechos reconocidos por esta ley y las cláusulas, los socios tendrán los siguientes derechos:

- a) Participar con voz y voto en las asambleas sobre bases de igualdad.
- b) Nominar candidatos, elegir y ser elegidos para desempeñar cargos en la junta de directores, comité de supervisión y comités auxiliares.
- c) Utilizar los servicios de la cooperativa de acuerdo con las normas establecidas.
- d) Solicitar información sobre la marcha de la cooperativa a la junta de directores o al comité de supervisión.
- e) Formular denuncias por incumplimiento de la ley, las cláusulas o el reglamento ante el comité de supervisión.
- f) Solicitar la convocatoria de la Asamblea General, en cumplimiento con las condiciones que requieran la ley y el reglamento.
- g) Someter enmiendas de las cláusulas y el reglamento para consideración de la Asamblea General, siempre que se sometan de forma que cumplan con los términos y condiciones de las cláusulas y el reglamento.

Artículo 8.4.

Deberes

Todo socio deberá cumplir con las obligaciones que le impone esta ley, las cláusulas, el reglamento y con:

- a) cualquier contrato, obligación social o pecuniaria con la cooperativa.
- b) los acuerdos de la asamblea y de su junta.
- c) desempeñar los cargos para los que fuera elegido.
- d) velar por los intereses de su cooperativa.

Artículo 8.5.

Socio de Dos o más Cooperativas

Toda persona podrá pertenecer a más de una cooperativa. Sin embargo, sus derechos y obligaciones podrán estar sujetos a las medidas que adopten las cooperativas para evitar situaciones conflictivas.

CAPITULO 9 Terminación

Artículo 9.0.

La Terminación

La condición de socio cesa por las siguientes causas:

- a) Muerte del socio.
- b) Renuncia del socio.
- c) Expulsión del socio.
- d) Terminación de la cooperativa.

Artículo 9.1.

Renuncia o retiro Voluntario del Socio

Cualquier socio de una cooperativa podrá retirarse voluntariamente de la misma excepto cuando ocupe cargo en la dirección de la cooperativa, en cuyo caso estará sujeto a las limitaciones establecidas en esta ley y en el reglamento de la cooperativa.

Artículo 9.2.

Presentación de la Renuncia

Cuando un socio desee terminar sus relaciones con la cooperativa, presentará su renuncia por escrito a la junta de directores.

Artículo 9.3.

Consideración Adversa a la Renuncia

Cuando la renuncia y retiro voluntario de un socio afecte adversamente los intereses económicos de la cooperativa, su junta de directores resolverá sobre dicho retiro de manera que no perjudique sustancialmente las operaciones y servicios de la cooperativa.

Artículo 9.4.

Causas de la Separación del Socio

La junta de directores podrá separar o expulsar a un socio de la cooperativa cuando considere que el socio:

- a) ha actuado en contra de los intereses de la cooperativa o de sus fines y propósitos.
- b) ha incurrido en mora en el cumplimiento de sus obligaciones con la cooperativa, habiéndole previamente notificado de su incumplimiento.
- c) ha realizado actos impropios que perjudiquen moral o materialmente a la cooperativa.
- d) ha infringido las disposiciones de esta ley.
- e) ha incurrido en cualquier falta grave considerada por el reglamento como causa de separación.
- f) ha expedido o cobrado a través de la cooperativa cheques fraudulentos o sin fondos suficientes para su pago, y en violación a las disposiciones del Código Penal de Puerto Rico.

Artículo 9.5.

Separación: Procedimiento ante la Junta

Cuando la junta determina que procede una acción para separar un socio, deberá notificar por correo certificado al socio afectado de los cargos que se le imputan tendientes a su separación de la cooperativa, especificando los cargos que se le imputan. La notificación lo citará a comparecer ante la junta, que celebrará una vista administrativa dentro de un término no menor de diez (10) días ni mayor de treinta (30) días desde el recibo de la notificación. El socio imputado podrá asistir a la vista acompañado de abogado, y tendrá derecho a examinar la prueba presentada en su contra, a contrainterrogar testigos y a ofrecer prueba en su favor. La junta evaluará la prueba presentada y emitirá su decisión dentro del plazo de (15) días a partir de la vista, y

notificará a la parte afectada en el plazo de cinco (5) días a partir de la toma de tal decisión. La efectividad de la decisión tomada por la junta será desde el momento de la notificación al socio afectado.

Artículo 9.6.

Revisión de la Decisión de Separación

Dentro del término de diez (10) días siguientes a la fecha en que se le notifique su separación, el socio separado o expulsado podrá requerirle a la junta que incluya su caso en la próxima asamblea general de socios, para que dicha asamblea revise el caso y decida sobre el mismo. El socio podrá comparecer acompañado de abogado. El socio que entienda que ha sido expulsado injustamente y que el lapso de tiempo a la próxima asamblea le puede causar daño irreparable, puede radicar una petición de revisión ante la Oficina del Inspector de Cooperativas, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que se le notifique su separación. La petición de revisión ante el Inspector no dejará sin efecto la decisión de la junta.

Artículo 9.7.

Responsabilidad por Deuda Contraída

La persona que haya cesado como socio de la cooperativa continuará siendo responsable por cualquier deuda contraída con la cooperativa, que sea mayor al pago en liquidación que le corresponda.

PARTE IV

Asambleas

CAPITULO 10

Disposiciones Generales

Artículo 10.0.

Autoridad de la Asamblea

La asamblea general, ordinaria o extraordinaria es la autoridad máxima de la cooperativa y sus decisiones son obligatorias para la junta de directores, los comités y todos los socios, presentes o ausentes, siempre que se hubiere adoptado de conformidad con la ley, las cláusulas y el reglamento.

Artículo 10.1.

Clasificación

Las asambleas que celebren las cooperativas pueden ser:

- a) asambleas generales de socios.
- b) asambleas generales en cooperativas organizadas por distritos, constituidas por delegados.
- c) asambleas de distritos.
- d) asambleas extraordinarias.

Artículo 10.2 Convocatorias

El aviso de la celebración de toda asamblea, a menos que las cláusulas o el reglamento dispongan un término mayor, será enviado por escrito a cada socio a su última dirección conocida con, por lo menos, diez (10) días de antelación a la fecha fijada para la celebración de la asamblea.

Artículo 10.3.

Asuntos que Competen Exclusivamente a la Asamblea

Es de competencia exclusiva de la asamblea, siempre que no contradigan las disposiciones de esta ley:

- a) Aprobar y modificar las cláusulas y el reglamento.
- b) Fijar la política general de la cooperativa.
- c) Elegir y remover a los miembros de la junta de directores y comités.
- d) Ratificar o rechazar las recomendaciones de la junta de directores sobre las compensaciones, si algunas, de los miembros de la junta y de los comités.
- e) Resolver sobre fusión, incorporación o disolución de la cooperativa.
- f) Decidir la acción a seguir contra los miembros de juntas de directores y comités de supervisión, cuando éstos actúen en violación de sus responsabilidades.
- g) Decidir sobre la capitalización o distribución de sobrantes.
- h) Decidir sobre la creación u operación de departamentos no provistos por las cláusulas o el reglamento.
- i) Decidir sobre la constitución de distritos, la representatividad y los respectivos derechos de socios.
- j) Recibir los informes de la junta de directores y los comités de supervisión y educación.

Artículo 10.4.

Impugnaciones de Decisiones de Asambleas

Las impugnaciones de las decisiones de asambleas se tramitarán ante la oficina del Inspector de Cooperativas.

CAPITULO 11

Asambleas Generales de Socios

Artículo 11.0.

Asamblea General de Socios; Definición

Una asamblea general de socios será aquella reunión abierta a todos los socios de la cooperativa que, según su reglamento, cualifiquen como tales.

Artículo 11.1.

Obligación de Celebrar Asambleas

Toda cooperativa que no esté organizada por distritos deberá celebrar por lo menos una asamblea general de socios cada dos años.

Artículo 11.2.

Fecha de Celebración de Asambleas

La asamblea general de una cooperativa deberá celebrarse en la fecha, hora y sitio que la junta de directores determine, pero dentro de los seis (6) meses siguientes al cierre de su año fiscal y en la fecha conveniente más cercana al referido cierre.

Artículo 11.3.

Quórum para Asambleas Generales de Socios

Una asamblea general de socios estará legalmente constituida cuando estén presentes las siguientes condiciones:

- a) cuando la matrícula sobrepasa cien (100) socios, el diez por ciento (10%) de éstos; más el cinco por ciento (5%) del exceso sobre mil, del total de socios.
- b) cuando la matrícula es menor de cien, un mínimo de quince (15) personas o dos terceras (2/3) partes de la matrícula, lo que sea menor.

Artículo 11.4.

Si falta el Quórum

La segunda convocatoria para una asamblea general de socios podrá indicar que el quórum de la misma se calculará sumando los socios presentes más aquellos ausentes que hayan prestado su representación mediante «proxy» a un socio presente en la asamblea. El reglamento interno de la cooperativa podrá disponer sobre las condiciones de ejercer la representación por «proxy». Cuando se emitan dos convocatorias para una asamblea general de socios y no se pueda lograr el quórum requerido, los incumbentes en posiciones directivas de la cooperativa continuarán ocupando las mismas hasta que sus sucesores sean electos y tomen posesión de los mismos.

CAPITULO 12

Asambleas en Cooperativas organizadas por Distritos

Artículo 12.0.

División por Distritos

Cuando la cooperativa esté operando una sucursal en otro municipio, podrá organizarse por distritos. El reglamento interno de la cooperativa podrá disponer la división por distritos del territorio donde residan sus socios.

Dicha división se podrá llevar a cabo una vez lo apruebe la asamblea general de socios y se le notifique al Inspector de Cooperativas.

Artículo 12.1.

Asamblea de Distrito

Los socios de cada distrito deberán celebrar por lo menos una asamblea cada dos años y aquellas asambleas extraordinarias que debidamente convoque la junta de directores de la cooperativa.

Artículo 12.2.

Dirección de los Trabajos

Los trabajos de las asambleas ordinarias y extraordinarias de distrito serán dirigidos por el presidente de la junta de directores de la cooperativa o por un director designado por ésta.

Artículo 12.3.

Quórum para Asamblea de Distrito

El requisito de quórum para la celebración de una asamblea de distrito será el diez por ciento (10%) de los primeros mil socios y el cinco por ciento (5%) del exceso sobre mil, del total de socios residentes en el distrito.

Artículo 12.4.

Mandato si Falta el Quórum

Cuando se emitan dos convocatorias para una Asamblea de distrito y no se pueda lograr el quórum requerido, los incumbentes en posiciones directivas de la cooperativa continuarán ocupando las mismas hasta que sus sucesores sean electos y tomen posesión de las mismas.

Artículo 12.5.

Elección de Delegados

En la asamblea de distrito se elegirá un número de delegados nunca menor de tres (3), o el número correspondiente al uno por ciento (1%) de los socios en el distrito, lo que sea mayor.

Artículo 12.6.**Asamblea General en Cooperativas Organizadas por Distritos**

Las cooperativas organizadas por distritos deberán celebrar anualmente por lo menos una asamblea general, compuesta por delegados. Los delegados electos en las asambleas de distrito constituirán la representación oficial de los socios de los distritos en las asambleas generales, ordinarias o extraordinarias de la cooperativa. Cada delegado de distrito tendrá derecho a un solo voto. Los miembros de la junta de directores y del comité de supervisión seguirán como delegados con voz y voto por sus respectivos distritos, durante el término para el cual fueron elegidos.

Artículo 12.7.**Quórum para la Asamblea General de la Cooperativa Organizada por Distritos**

Una asamblea general de cooperativa organizada por distritos estará legalmente constituida cuando estén presentes tres cuartas partes (3/4) del total de delegados electos por los distritos.

CAPITULO 13**Asambleas Extraordinarias****Artículo 13.0.****Convocatorias**

La junta de directores podrá convocar asambleas extraordinarias, generales o de distrito, cuando lo estime conveniente. La junta de directores se verá en la obligación de convocar asambleas extraordinarias cuando lo soliciten:

- a) diez por ciento (10%) del número total de socios de la cooperativa, cuando se trata de una asamblea general de socios.
- b) diez por ciento (10%) del número total de socios residentes en un distrito, cuando se trata de una asamblea de distrito
- c) treinta por ciento (30%) del número total de delegados, cuando se trata de una asamblea general en cooperativa organizada por distritos.

Artículo 13.1.**Quórum para Asambleas Extraordinarias**

El número de socios necesarios para constituir legalmente una asamblea extraordinaria será el mismo requerido para las asambleas ordinarias según su clasificación.

PARTE V**Directores, Funcionarios y Comités****CAPITULO 14****En general****Artículo 14.0.****Requisitos**

Podrán ser miembros de la Junta y del Comité de Supervisión, los socios que:

- a) No hayan sido convictos por delito grave o menos grave que implique fraude, abuso de confianza o depravación moral.
- b) No posean interés económico, directo o indirecto en cualquier empresa cuyos negocios estén en competencia con los de la cooperativa.
- c) No ocupen cargos o posiciones en otras entidades con o sin fines lucrativos que puedan constituir un conflicto en el desempeño de sus responsabilidades.

- d) No hayan sido separados como miembros de junta o comité, o como funcionario ejecutivo de otra cooperativa por las causas establecidas en esta ley.
- e) Cumplan con todos los requisitos establecidos en el reglamento de la cooperativa.
- f) Sean elegibles para estar cubiertos por una fianza de fidelidad.
- g) Estén al día en sus obligaciones con la cooperativa.

Artículo 14.1.

Términos de Elección

Los términos de los miembros de la junta y del comité de supervisión serán por un mínimo de un (1) año y un máximo de cuatro (4) años, sujeto a prolongación mediante reelección, y hasta que sus sucesores tomen posesión del cargo. El reglamento de la cooperativa especificará los términos para los directores y miembros del comité de supervisión.

Artículo 14.2.

Elección Escalonada

El reglamento de la cooperativa proveerá para la elección escalonada de los miembros de la Junta y del comité de supervisión de forma tal que el término de elección de los miembros de dichos cuerpos no venza en un mismo año.

Artículo 14.3.

Lista de Directores y Miembros de Comités

Las cooperativas deberán emitir al Inspector una lista completa de los miembros de junta e indicando su posición como oficial de la misma, si alguna, de los miembros del comité de supervisión, y de algún otro comité permanente que se establezca por reglamento. Esta lista, que deberá acompañarse de cualquier otra información requerida, se enviará al Inspector no más tarde de veinte (20) días a partir de la fecha en que tales miembros hayan tomado posesión de sus cargos, incluyendo aquéllos nombrados para ocupar posiciones vacantes.

Artículo 14.4.

Causas para la Separación de Directores y Miembros de Comité

Todo miembro u oficial de la junta, del comité de supervisión o de otro comité permanente, podrá ser separado de su cargo por las siguientes causas:

- a) Incurra en cualquiera de los actos constitutivos de causa para la separación de socios de una cooperativa, según dispone la presente ley.
- b) Violan las disposiciones de esta ley o de los reglamentos adoptados en virtud de la misma para asegurar el descargo cabal de sus responsabilidades fiduciarias.
- c) Violan el reglamento de la cooperativa.
- d) Violan o hagan caso omiso de las resoluciones o acuerdos tomados por asamblea de la cooperativa.
- e) Dejen de ser elegibles para ocupar sus cargos, según dispone la presente ley.
- f) Incurran en negligencia crasa en el desempeño de sus funciones.
- g) Observen prácticas negligentes o dolosas en la administración y operación de la cooperativa.

CAPITULO 15

Director

Artículo 15.0.

Directores; Número y Requisito

Los asuntos de la cooperativa serán dirigidos por una junta de directores compuesta por un número impar de socios no menor de tres (3) ni mayor de once (11), elegidos en asamblea por los socios.

Artículo 15.1.

Constitución de la Junta

La junta se reunirá dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la celebración de la asamblea general para elegir sus oficiales de entre sus miembros.

Artículo 15.2.

Oficiales de la Junta

Los oficiales de la junta de directores serán el presidente, el secretario, el tesorero y cualquier otro que disponga el reglamento.

Artículo 15.3.

Reelección de Directores

Nadie podrá ser elegido por más de tres (3) términos consecutivos. Los directores que cumplan sus tres términos no serán elegibles para un puesto electivo sino hasta la asamblea anual siguiente a la que venció su término. Se entenderá que la persona electa ha cumplido su término, siempre que haya servido en su cargo por lo menos la mitad del tiempo para el que fue elegido.

Artículo 15.4.

Deberes de la Junta

La junta de directores tendrá, entre otros, los siguientes deberes:

- a) Ser la responsable de la administración general de la cooperativa, por la que tendrán una responsabilidad fiduciaria y el deber de actuar como un buen padre de familia.
- b) Establecer las políticas y directrices para el debido funcionamiento de la cooperativa.
- c) Considerar, aprobar o tomar determinaciones sobre las solicitudes de ingreso, retiros voluntarios o separación de socios. Podrá nombrar uno o más oficiales con autoridad para aprobar los ingresos y retiros voluntarios de socios, quienes rendirán un informe mensual a la junta.
- d) Asegurar que toda persona que maneje dinero o valores de la cooperativa esté cubierta por una fianza de fidelidad.
- e) Mantener los registros y libros de cuentas de la cooperativa en su oficina principal en Puerto Rico.
- f) Recomendar a los socios en la asamblea general la capitalización o distribución de los sobrantes, sujeto a las limitaciones que señala esta ley.
- g) Notificar a los socios la celebración de asambleas, e informar de las enmiendas propuestas al reglamento y a las cláusulas.
- h) Establecer la política de inversiones de la cooperativa, y velar por su cumplimiento.
- i) Nombrar un Comité de Educación no menor de tres ni mayor de siete miembros, quienes serán en su mayoría personas que no ocupen posiciones electivas en la cooperativa, y le asignará anualmente un presupuesto para que el comité pueda llevar a cabo un plan de trabajo aprobado por la junta.
- j) Nombrar y supervisar al principal funcionario ejecutivo de la cooperativa, quien ejercerá aquellas funciones, deberes y responsabilidades que le fije la junta.
- k) Fijar las normas para la compensación que devengarán los funcionarios ejecutivos y empleados de la cooperativa.
- l) Contratar contadores públicos autorizados para intervenir en las cuentas de la cooperativa, en cumplimiento del requisito de ley de realizar una auditoría anual de la

cooperativa conforme al reglamento que promulgue la Oficina del Inspector, y en cualquier otro momento que la junta estime necesario o conveniente.

m) Autorizar la contratación de otros profesionales para el logro de sus responsabilidades y fines de la cooperativa.

n) Proveer a la cooperativa de protección contra escalamientos, desfalcos y otras pérdidas asegurables.

ñ) Someter al Inspector un informe anual sobre los asuntos de la cooperativa dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la terminación de su año fiscal.

o) Reunirse por lo menos una vez cada mes y elaborar actas que deberán ser aprobadas y firmadas por todos los directores asistentes p) Asistir a las asambleas y los actos oficiales, y cumplir fielmente con las responsabilidades encomendadas por la asamblea, el reglamento, cláusulas y leyes q) Responder por violación de la ley, las cláusulas y el reglamento. Un miembro de la junta sólo puede eximirse de responsabilidad por constancia en el acta de la reunión de su voto en contra r) Coordinar reuniones con los comités para armonizar funciones o resolver situaciones s) Asignar a los comités de educación y supervisión los recursos requeridos para cumplir con sus planes de trabajo.

Artículo 15.5.

Comité Ejecutivo

Los directores de una cooperativa podrán nombrar un comité ejecutivo compuesto por no menos de tres (3) miembros de la junta. Dicho comité ejecutará los acuerdos de la junta de directores y lo que el reglamento interno le encomiende.

Artículo 15.6.

Ejercicio de Poderes

Los directores ejercerán sus poderes a través de la junta. Las decisiones de la junta serán tomadas por acuerdo de la mayoría de los directores votantes que participen en las reuniones debidamente notificadas y constituidas. Sin embargo, será válida toda decisión cuando se adopte en una reunión en que estén presentes todos los directores y firmen una renuncia de cumplimiento con el requisito de citación. Dicha renuncia debe formar parte del acta de la reunión.

Artículo 15.7.

Quórum

El quórum para dichas reuniones será la mayoría absoluta del número total de directores en propiedad.

Artículo 15.8.

Reglas de Funcionamiento

La junta deberá adoptar reglas sobre el funcionamiento interno, que deberá contener normas procesales, definición de funciones y tareas, y sobre la elaboración y conservación de las actas.

Artículo 15.9.

Funciones del Presidente de la Junta

El presidente de la junta de directores de la cooperativa ejercerá las siguientes funciones:

a) La representación legal de la cooperativa, la cual podrá delegarla en uno o más de sus miembros conforme establezcan las cláusulas y el reglamento b) Presidirá las sesiones de la asamblea general y de junta de directores y los actos oficiales de la cooperativa.

Artículo 15.10.

Vacantes

Las vacantes que surjan entre los miembros de la junta serán cubiertas por voto de mayoría de los miembros restantes en reunión debidamente constituida para tales efectos. Cuando la cooperativa esté organizada por distritos y el miembro que ocasione la vacante sea un director de distrito, la vacante será cubierta por la junta con otro socio del distrito que corresponda.

Artículo 15.11.

Destitución de Oficial

Dos terceras partes de los miembros de la junta podrán mediante petición escrita radicada ante el secretario o el presidente de la junta, destituir a un director de su posición de oficial de la junta. Desde la radicación de la petición, el director cesará de ejercer la posición designada como presidente, vicepresidente, secretario u otra, pero continuará en su función como director de la junta.

Artículo 15.12.

Separación de Directores

Todo socio podrá iniciar un procedimiento de separación contra un director radicando, ante el secretario o presidente de la cooperativa y con copia al comité de supervisión, una solicitud escrita que exponga los cargos imputados y que esté firmada por el cinco por ciento (5%) de todos los socios. Todo director podrá iniciar un procedimiento de separación contra otro director radicando, ante el secretario o presidente de la junta de directores y con copia al comité de supervisión, una solicitud escrita que exponga los cargos imputados y que esté firmada por dos terceras (2/3) partes de los restantes miembros de la junta. Tal solicitud será sometida ante la consideración de la próxima asamblea de socios, que podrá ser extraordinariamente convocada para tal efecto. Dicha asamblea podrá separar al director de la junta con el voto concurrente de la mayoría de los socios presentes.

Artículo 15.13.

Separación; Procedimiento ante Asamblea

El director al cual se le formule cargos para su separación de la junta, será notificado de los mismos por escrito con no menos de diez (10) días de antelación a una asamblea. Tendrá la oportunidad en la asamblea de ser oído en persona o por medio de su abogado, y de ofrecer evidencia. La persona o personas que hubiesen formulado los cargos contra él, gozarán de igual derecho.

CAPITULO 16

Comités

Artículo 16.0.

Comité de Supervisión

La función de vigilancia de la cooperativa la desempeñará el comité de supervisión. Tiene a su cargo fiscalizar la actividad económica y social de la cooperativa y velar porque la junta de directores cumpla con la ley, las cláusulas, los reglamentos y las resoluciones de las asambleas. Ejercerá sus atribuciones de modo de no entorpecer las funciones y actividades de los otros órganos.

Artículo 16.1.

Elección de Comité de Supervisión

En las asambleas generales de cada cooperativa se elegirá un comité de supervisión que estará constituido por no menos de tres (3) personas.

Artículo 16.2.

Obligaciones y Facultades del Comité de Supervisión

El Comité de supervisión tendrá las siguientes obligaciones y facultades:

- a) Elegir, de su seno a su presidente, vice-presidente y secretario, y aceptar la dimisión o renuncia de sus miembros.
- b) Establecer las reglas de procedimiento interno, incluyendo aquéllas requeridas para atender las querellas que surjan en la cooperativa.
- c) Fiscalizar y examinar los documentos, libros de cuentas y demás operaciones de la cooperativa, e intervenir en los mismos por lo menos una vez al año.
- d) Estar pendientes de que los fondos en caja, en bancos y los valores y títulos de la cooperativa, o los que ésta tenga en custodia o en garantía, estén debidamente salvaguardados.
- e) Verificar la existencia y valorización de los bienes de la cooperativa y particularmente de las aportaciones de los socios.
- f) Podrá solicitarle a la junta los fondos requeridos para contar con los servicios de personal profesional necesario para llevar a cabo sus funciones. La junta deberá contratar los auditores externos que el comité de supervisión le solicite, cuando por petición escrita, el comité le exponga a la junta la necesidad de tal contratación para poder descargar sus responsabilidades de intervención de cuenta.
- g) Velar porque la contabilidad sea llevada con estricta sujeción a la Ley, verificando la veracidad de las informaciones contables.
- h) Recibir y analizar los informes de los auditores internos o externos, así como los del Inspector.
- i) Inspeccionar los libros de actas de la junta de directores y de los comités.
- j) Verificar la constitución y subsistencia de las garantías o seguros de fianza.
- k) Comunicar a la junta de directores su opinión u observaciones sobre las críticas o reclamaciones de los miembros de la cooperativa.
- l) Estar pendiente del curso de las acciones judiciales de que la cooperativa sea parte.
- m) Deberá rendir a la junta de directores, a la asamblea de socios, y al Inspector de Cooperativas copia de un informe escrito de los exámenes realizados. Dicho informe deberá ser enviado y discutido con la junta de directores con por lo menos treinta (30) días de antelación a la celebración de la asamblea anual.
- n) Presentar a la asamblea general, el informe de sus actividades y proponer las medidas necesarias para asegurar el buen funcionamiento de la cooperativa.
- ñ) Actuará como mediador en las controversias surgidas en la cooperativa, y atenderá toda querella de socio o no socio que surja en la cooperativa, refiriendo al Inspector solamente querellas meritorias que impliquen violaciones a esta ley, que el Comité de Supervisión no pueda resolver.
- o) Podrá solicitarle a la junta de directores que convoque a una asamblea extraordinaria de socios para discutir asuntos de importancia e interés para los socios.
- p) Ofrecerá sugerencias y recomendaciones a la junta para solucionar deficiencias encontradas en los procedimientos y operaciones de la cooperativa. Si la junta no actuase para corregir las deficiencias señaladas y dichas deficiencias pudieran causar un daño sustancial e irreparable a la cooperativa, el comité podrá convocar una asamblea de socios para someterles el referido informe.
- q) Llenará las vacantes que surjan en el comité hasta tanto se celebre la próxima asamblea general y sean electos los nuevos miembros.
- r) Ejercer las demás atribuciones de su competencia por disposición expresa de la ley.

Artículo 16.3.**Separación el Comité de Supervisión**

Los miembros del comité de supervisión podrán ser separados de sus cargos en cualquier asamblea general de socios o delegados, previa formulación de cargos y notificación.

Artículo 16.4.**Comité de Educación**

La junta designará un comité de educación cuyas funciones, además de las que disponga el reglamento interno de la cooperativa, serán las siguientes:

1. Acorde con la política que establezca la junta, preparar un plan de educación que contenga lo siguiente:

a) Atender las necesidades de capacitación de los directores y miembros de comité sobre las materias

inherentes a las funciones que desempeñan.

b) Brindar educación al personal de la cooperativa sobre los principios, métodos y características del cooperativismo y la gestión empresarial de la cooperativa.

c) Brindar información a la comunidad sobre los beneficios del cooperativismo.

2. Rendir un informe a la asamblea general.

Artículo 16.5.**Vacantes en el Comité de Educación**

Cuando surja una vacante en el comité de educación, la misma será cubierta por la junta de directores; la duración será el resto del término.

CAPITULO 17**Gerentes****Artículo 17.0.****Designación del Administrador Gerente**

La junta de directores podrá designar un administrador o gerente encargado de la función ejecutiva. Estará subordinado a la junta de directores, la cual le supervisará e impartirá instrucciones.

Artículo 17.1.**Funciones del Administrador o Gerente**

Los deberes específicos del gerente deben constar por escrito en documento aprobado por la junta y aceptado por el funcionario. Dicho documento podrá contener, sin que se entienda como una limitación, las siguientes funciones básicas:

a) Ejercer la representación administrativa de la cooperativa en lo concerniente al comercio y como patrono.

b) Podrá suscribir a nombre de la cooperativa aquellos contratos que sean cónsonos con las responsabilidades que hayan sido autorizadas por la junta de directores.

c) Ejecutar los programas o planes aprobados por la junta de directores.

e) Nombrar a los trabajadores de la cooperativa y removerlos con arreglo a la ley, la reglamentación aplicable y las normas establecidas por la junta.

f) Coordinar las actividades de los comités con el funcionamiento de la junta de directores y de la propia gerencia.

g) Asesorar a la asamblea general, y cuando se le solicite, a la junta de directores y a los comités.

h) Realizar otros actos de su competencia según las normas escritas que establezca la junta.

Artículo 17.2.

Fianza del Gerente

Antes de entrar en funciones, el administrador o gerente deberá rendir fianza para garantizar el buen cumplimiento de sus responsabilidades con la cooperativa. El monto y la calidad de la fianza serán fijados por reglamentación que a esos efectos promulgue el Inspector de Cooperativas.

Artículo 17.3.

Responsabilidades del Gerente

El administrador o gerente responderá ante la cooperativa por:

- a) Los daños y perjuicios que ocasionare a la propia cooperativa por el incumplimiento de sus obligaciones, negligencia grave, dolo o abuso de facultades.
- b) La existencia, regularidad y veracidad de los libros y demás documentos que la cooperativa debe llevar para cumplir con la ley, excepto los que sean de responsabilidad de la junta.
- c) La veracidad de las informaciones que proporcione a la asamblea general, a la junta de directores, al comité de supervisión y a la presidencia de la junta.
- d) La existencia de los bienes consignados en los inventarios.
- e) El ocultamiento de las irregularidades que observare en las actividades de la cooperativa.
- f) La conservación de los fondos sociales en caja, en bancos o en otras instituciones y en cuentas a nombre de la cooperativa.
- g) Empleo de los recursos de la misma en actividades distintas a los fines de la cooperativa.
- h) El uso indebido del nombre o de los bienes de la cooperativa.
- i) El incumplimiento de la ley y de las normas internas.

CAPITULO 18

Prohibiciones; Conflicto de Intereses

Artículo 18.0.

Conflicto de Intereses

Esta ley establece las siguientes prohibiciones por razón de conflicto de intereses:

- a) Ningún miembro del comité de supervisión de una cooperativa podrá ser pariente, hasta segundo grado de consanguinidad y tercer grado de afinidad, de un miembro de la junta de directores.
- b) No podrán ser miembros de la junta de directores ni de los comités, ni desempeñar cargo o empleo alguno en la cooperativa, aquellas personas cuyos intereses personales, matrimoniales o corporativos, estén en competencia con los de la cooperativa o resulten beneficiados por lazos comerciales con ésta.
- c) Ningún empleado de la Administración de Fomento Cooperativo, de la Oficina del Inspector de Cooperativas, de la Corporación de Seguros de Acciones y Depósitos, o de la Liga de Cooperativas podrá ser delegado o director de una cooperativa, salvo que la cooperativa esté organizada en el lugar donde trabaja
- d) Ningún empleado de una cooperativa podrá ser delegado o director de la cooperativa para la cual trabaja, excepción hecha de las cooperativas de trabajadores.

Artículo 18.1.

Compensación

Los miembros de la Junta, de los Comités de Supervisión, Crédito y Educación y los de cualquier otro comité electo por la asamblea general, estarán impedidos de recibir compensación o remuneración alguna por el desempeño de sus funciones. No obstante, se les podrán reembolsar los gastos en que realmente incurran en el desempeño de sus funciones, de acuerdo al reglamento que adopte la Junta de Directores de cada cooperativa con la aprobación de la asamblea de la misma. Las cooperativas podrán proveer a los miembros de la Junta y de los Comités de Supervisión, Crédito y Educación los seguros necesarios para que, a la vez que se protegen los intereses de la cooperativa se proteja a cada uno de ellos en su carácter personal mientras se encuentran realizando las funciones de sus cargos.

Artículo 18.2.

Limitaciones de Empleo

Ningún director o miembro de comité podrá ser empleado de la cooperativa hasta haber transcurrido por lo menos un (1) año de haber cesado en su posición en la junta, excepto cuando el nombramiento sea aprobado por las tres cuartas (3/4) parte de los miembros de la junta de directores y por la mayoría de los miembros del comité de supervisión.

PARTE VI

Negocios y Finanzas

CAPITULO 19

Partidas principales

Artículo 19.0.

Capital de la Cooperativa

El capital de las cooperativas constituirá de la suma de:

- a) las aportaciones de los socios.
- b) las economías netas acumuladas y no distribuidas.
- c) las obligaciones de capital.
- d) las donaciones recibidas.
- e) las reservas y fondos permanentes.

Artículo 19.1.

Aportaciones de los Socios

Las cláusulas de incorporación señalarán el capital inicial de la cooperativa y la suma mínima que un socio debe aportar o acciones que debe suscribir. Las aportaciones o acciones podrán ser pagadas en dinero, bienes o servicios, de acuerdo con lo que dispongan las cláusulas de la cooperativa. El reglamento de la cooperativa dispondrá sobre la forma y procedimiento a utilizarse para determinar la valorización de los bienes y servicios para el pago de las aportaciones o acciones; el trabajo personal de los incorporadores o promotores de la cooperativa, realizado previo a la formación de la misma, no podrá ser valorado como aportación, ni compensado con acciones.

Artículo 19.2.

Certificado de Aportaciones

Las aportaciones de los socios podrán estar representadas por certificados de numeración continua e individual, o por un estado de cuenta o inversión.

Artículo 19.3.

Economías Netas

Las economías netas serán el resultado favorable de las operaciones de la cooperativa durante el año fiscal, luego de decididos los gastos y las depreciaciones.

Artículo 19.4.

Número de Reservas; Prioridad

Toda cooperativa deberá establecer, por el orden de prioridad que se indica, las siguientes reservas:

1. Reserva social.
2. Reserva para servicios.
3. Las reservas legales requeridas para realizar determinadas actividades.

Artículo 19.6.

Pérdidas Descontadas

Cuando la cooperativa opere con pérdidas, deberá distribuir esas pérdidas entre las acciones emitidas en caso de cualquier retiro de acciones. La cooperativa no deberá desembolsar más por una acción retirada que su valor real.

Artículo 19.7.

Reserva Social

Las cláusulas, el reglamento o la junta de directores regularán la cantidad a separar para nutrir la reserva social, pero dicha cantidad no deberá ser menor del diez por ciento (10%) de las economías netas, hasta que la cantidad acumulada en esta reserva sea igual al treinta por ciento (30%) del valor en los libros de los bienes tangibles de la cooperativa. La reserva social de la cooperativa es irrepartible y, por tanto, no tienen derecho a reclamar ni a recibir parte alguna de ella, los socios, los que hubieren renunciado, los excluidos ni, cuando se trate de personas naturales, los herederos de unos ni otros. Cualquier cargo contra esta reserva deberá ser por razón de una emergencia de la cooperativa mediante previa autorización de la junta de directores y el comité supervisión, e informada en la próxima asamblea de socios, o por una eventualidad que requiera la aprobación de dos terceras partes de la asamblea.

Artículo 19.8.

Reserva para Servicios

Una reserva para servicios se nutrirá del diez por ciento (10%) de las economías netas de la cooperativa. La reserva de servicios se utilizará para lo siguiente:

- a) educación de los socios y no socios.
- b) servicios comunitarios.

La junta de directores determinará cómo utilizar esta reserva dentro de las alternativas antes mencionadas.

Artículo 19.9.

Inversiones

Las inversiones externas de la cooperativa deberán hacerse preferentemente en otros organismos cooperativos. La cooperativa también podrá realizar sus inversiones de la forma siguiente:

- a) en cuentas de bancos e instituciones que estén aseguradas por el Federal Deposit Insurance Corporation o en cualquier otra entidad asegurada por instituciones de seguros bancarios del Gobierno Federal o del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
- b) en bonos del Estado Libre Asociado y de los Estados Unidos de América.

- c) en bonos y acciones en corporaciones gubernamentales del Estado Libre Asociado y de los Estados Unidos de América.
- d) en entidades que cumplan con los requisitos exigidos a los fideicomisos.
- e) en acciones y valores de cualquier organización cuyas actividades estén en armonía con las operaciones de la cooperativa.

CAPITULO 20

Contratos de la Cooperativa

Artículo 20.0.

Poder de Contratar

Las cooperativas podrán celebrar todo tipo de contrato que sea conveniente o propio para la consecución de sus fines y propósitos.

Artículo 20.1.

Contrato como Requisito

Las cooperativas podrán establecer como condición de socio o como condición para extender sus actividades a personas no asociadas, que se celebre un contrato que regule las relaciones comerciales o de servicios entre los interesados.

Artículo 20.2.

Contrato de Mercadeo

En todo contrato en que la cooperativa sea mandatoria de un socio para el propósito de mercadear los productos o bienes del socio, se podrá estipular que éste transfiera a la cooperativa su derecho de dominio sobre los bienes objeto del contrato. Dicho contrato permitirá a la cooperativa gravar los bienes en cuestión en la medida que estime conveniente para llevar a cabo los fines últimos del contrato. Tal contrato podrá tener vigencia por un término máximo de diez (10) años.

Artículo 20.3.

Capital a Préstamo

En las cláusulas de incorporación o en el reglamento interno podrá proveerse para la creación de un capital a préstamo, a favor de la cooperativa. Dicho capital a préstamo será recaudado mediante la contribución en efectivo hecha por los socios o mediante la acumulación de economías o intereses devengados por los socios en sus transacciones con la cooperativa. El límite máximo de la contribución o inversión del socio se fijará en las cláusulas o el reglamento. Si el contrato entre la cooperativa y el socio no estipula fecha fija para el retiro ni incluye alguna otra disposición limitativa, el socio podrá retirar su inversión en cualquier momento. Si la junta de directores considerase que dicho retiro fuese perjudicial para el desenvolvimiento de la cooperativa, éste podrá exigir un plazo no menor de noventa (90) días para hacer efectivo el mismo.

Artículo 20.4.

Contrato de Préstamo

Toda cooperativa cuyas cláusulas lo permitan, podrá conceder préstamos a socios y a no socios. La solicitud de préstamo deberá indicar el propósito para el cual se solicita, la garantía que se ofrece y cualquier otra información que se estime pertinente. El préstamo deberá estar evidenciado por un pagaré, redactado según las directrices de la Junta. Sus firmantes serán considerados deudores solidarios. La cooperativa podrá aceptar otras garantías. El deudor podrá pagar su préstamo, en todo o en parte, durante las horas laborables de la cooperativa.

Artículo 20.5.**Cooperativas no Restringen Negocios**

Las cooperativas organizadas bajo esta Ley no serán consideradas como una conspiración o combinación para restringir los negocios ni como monopolio ilegal por causa de sus contratos, negocios o actividades; ni se considerarán que han sido organizadas con el propósito de disminuir la competencia o de fijar precios arbitrariamente, ni se interpretarán los contratos celebrados entre ellas y sus socios y otros patrocinadores, ni los demás contratos autorizados o que se celebren a virtud de las disposiciones de esta Ley, como una restricción ilegal de los negocios y como parte de una conspiración o combinación para realizar un propósito y acto impropio o ilegal.

CAPITULO 21**Distribución del Sobrante****Artículo 21.0.****Sobrante**

Luego de separar las reservas, la cooperativa podrá distribuir el remanente o sobrante de sus economías netas al cierre de su año fiscal, o capitalizar el mismo. La distribución la debe lograr a base de patrocinio.

Artículo 21.1.**Cálculo del Patrocinio**

Para calcular el patrocinio, podrá usarse el precio en el mercado, el tiempo invertido el peso, la cantidad o cualquier otra mediada razonable que pueda determinar el valor de un servicio o un artículo. La determinación al respecto será tomada por la junta de directores de la cooperativa.

CAPITULO 22**Transacciones sobre cuentas de socios****Artículo 22.0.****Emisión**

La cooperativa no emitirá ningún certificado de acciones o de aportaciones hasta que haya sido pagado en su totalidad.

Artículo 22.1.**Notificación de retiros**

La cooperativa podrá requerir que cualquier notificación de retiro de depósitos se haga con treinta (30) días de anticipación; y que el retiro de acciones o aportaciones le sea notificado con noventa (90) días de anticipación.

Artículo 22.2.**Liquidación de la Participación del Socio**

En caso de retiro, muerte o separación de un socio, la cooperativa deberá pagar a éste, su representante autorizado, sus beneficiarios o sus herederos, según fuera el caso, la cantidad de dinero equivalente a su aportación, más cualquier suma por concepto de intereses que hubiese acumulado el socio en la cooperativa, dentro de los noventa (90) días del retiro, muerte o separación. La cooperativa deberá también ser diligente en el pago de dividendos declarados, y en la realización de cualquier trámite relacionado con seguros de vida de la persona que ha cesado como socio. Cualquier deuda que tenga el

socio con la cooperativa deberá ser descontada de dicho pago. En caso de muerte del socio, la cooperativa deberá cumplir con las disposiciones sobre sucesiones y herencias del Código Civil de Puerto Rico.

Artículo 22.3.

Aplazamiento del Pago

Cuando una cooperativa tenga déficit en su capital, o cuando no lo permita su situación financiera, podrá aplazar el pago correspondiente a la cesación de un socio por un período no mayor de dos (2) años, excepto el pago por seguro de vida.

Artículo 22.4.

Retiro por los Cuerpos Directivos

Ningún director, funcionario, o miembro de comité o socio que esté participando directamente en la administración de una cooperativa podrá hacer retiro de sus acciones o aportaciones salvo que la cooperativa tenga una sólida condición económica y con la aprobación de la junta de directores, del comité de supervisión y del comité de crédito, si lo hubiere.

Artículo 22.5.

Nulidad de retiro

Será nulo cualquier retiro de acciones o aportaciones de socio efectuado dentro de los noventa (90) días precedentes a una declaración de insolvencia de la cooperativa. Cualquier socio que haya retirado aportaciones durante dicho período, continuará respondiendo a los acreedores de la cooperativa por el valor de dichas aportaciones.

CAPITULO 23

Disposiciones Fiscales

Artículo 23.0.

Exención Contributiva

Regirán para las cooperativas de primero, segundo y tercer grado, las siguientes exenciones contributivas, por ser entidades sin fines de lucro:

- a) Del pago de contribuciones sobre ingresos.
- b) Del pago de contribuciones y arbitrios sobre acciones emitidas.
- c) Del pago de derechos, arbitrios o aranceles estatales o municipales, incluyendo el pago de cargos por licencias, patentes, permisos y registros, así como el pago de derechos por el otorgamiento de toda clase de documentos, la inscripción de los mismos en el Registro de Propiedad y la expedición de certificaciones por dicho registro por cualquier otra oficina gubernamental.
- d) Del pago de todo impuesto, los intereses y excedentes que las cooperativas distribuyan a sus socios o en su caso a los beneficiarios o herederos de éstos.
- e) Del pago de patentes municipales.

Artículo 23.1 Exoneración Contributiva sobre la Propiedad

Las cooperativas estarán exentas del pago de toda contribución sobre la propiedad mueble de la cooperativa, y también sobre su propiedad inmueble valorada hasta un máximo de \$ 500,000.

Artículo 23.2.

Bienes Inembargables

Las aportaciones de los socios de las cooperativas y los correspondientes intereses, capitalizados o no, tendrán la calidad de bienes inembargables, excepto por la propia cooperativa.

Artículo 23.3.

Transacciones de Bienes Inmuebles con el Gobierno

El gobierno estatal y los gobiernos municipales podrán vender, arrendar, permutar o de cualquier otra forma, traspasar a las cooperativa organizadas bajo las leyes de Puerto Rico, propiedades inmuebles de dichos gobiernos sin sujeción al requisito de subasta en los casos en que ésta sea requisito de ley, siempre que sea por precio razonable. Las propiedades adquiridas de tal forma y en la eventualidad de que la cooperativa las desee vender, serán ofrecidas primero al gobierno en retroventa, que tendrá treinta (30) días para informarle a la cooperativa de su intención de readquirirla.

Artículo 23.4.

Cobro de derechos

El Secretario de Estado de Puerto Rico cargará y recaudará a beneficio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en sellos de rentas internas, los siguiente derechos por el archivo en su oficina de cualquier certificado o documentos relativo a las sociedades cooperativas a que se refiere esta Ley:

- a) Por recibir, archivar y registrar las cláusulas de incorporación o enmiendas a las mismas \$ 10.00.
- b) Por exceder certificados de registro como persona jurídica \$2.00.
- c) Por archivar certificados de acuerdo de disolución \$2.00.
- d) Por expedir certificados de disolución \$2.00.
- e) Por expedir copia de cualquier documento o papel archivado, relativo a asociaciones de esta índole, diez (10) centavos por cada cien (100) palabras.
- f) Por certificar la copia antes mencionada y estampar en ella el sello del Estado Libre Asociado \$1.00.

PARTE VII

Integración Cooperativa

CAPITULO 24

Fusión de Consolidación

Artículo 24.0.

Fusión

Dos o más cooperativas organizadas bajo esta ley, podrán fusionarse. Al hacerlo, una (o más cooperativas) cederá su nombre, activos y demás bienes y derechos a la otra cooperativa, que será la que permanecerá existiendo como entidad jurídica reconocida.

Artículo 24.1.

Consolidación

Dos o más cooperativas podrán consolidarse, en cuyo caso, las dos o más cooperativas formarán una nueva entidad cooperativa diferente a las de antes existentes, que se hará cargo de los activos y pasivo de aquéllas.

Artículo 24.2.

Votación

Las cooperativas podrán fusionarse o consolidarse por el voto afirmativo de dos terceras (2/3) partes de los socios presentes en asamblea debidamente convocada y constituida para ese fin. En el caso de cooperativas organizadas por distritos, se aplicará lo antes dicho a la Asamblea de Delegados.

Artículo 24.3.

Proyecto de Convenio

Conjuntamente con la convocatoria a dicha asamblea, se deberá circular entre todos los socios de cada una de las cooperativas, el proyecto de convenio para la fusión o consolidación de las cooperativas. El proyecto deberá establecer los términos y condiciones de la fusión o consolidación, la forma en que habrá de llevarse a cabo, la forma en que el capital ha de quedar representado, los derechos y obligaciones de los socios y directores, y todos los demás detalles o disposiciones que los directores consideren necesarios o pertinente para perfeccionar la fusión o consolidación.

Artículo 24.4.

Trámite de Registro

En el caso de que las cooperativas que se fusionen o consoliden aprueben el referido convenio, el secretario y el presidente de cada una de las cooperativas, certificarán bajo juramento la resolución aprobada al efecto. Dicha resolución, así aprobada y certificada, será sometida con tres copias al Inspector de Cooperativas de Puerto Rico, conjuntamente con el convenio de fusión suscrito por el presidente y secretario de cada una de las cooperativas para su aprobación final. Si el Inspector de Cooperativas de Puerto Rico determina que dicha fusión o consolidación se llevó a cabo en conformidad con las disposiciones de esta ley, someterá el original de la resolución aprobando el convenio al Departamento de Estado para su registro, juntamente con los documentos pertinentes de incorporación y cancelación, dentro de los sesenta (60) días de haberse radicado el convenio. El Inspector retendrá en sus archivos el original del convenio y copia de la resolución aprobando dicho convenio y copia del Certificado de Registro. Si el Inspector determina que no se ha cumplido con las disposiciones de esta ley, notificará su decisión a todas las cooperativas concernidas. El Inspector deberá notificar su decisión de rechazo dentro de los treinta (30) días de haber recibido los documentos aludidos y en su notificación deberá exponer las razones para el rechazo.

CAPITULO 25

Integración superior

Artículo 25.0.

Disposición General

Las cooperativas podrán asociarse entre sí para intercambiar servicios, celebrar contratos y actividades, complementar negocios, cumplir de mejor forma con sus fines sociales, y en fin llevar a cabo el principio de la integración cooperativa.

Artículo 25.1.

Formación de Cooperativas de Grado Superior

Por resolución de sus respectivas asambleas, las cooperativas podrán constituir cooperativas de segundo nivel o superior grado, o asociarse a ellas. También podrán asociarse con organizaciones afines y asociaciones sin fines de pecuniarios. Las cooperativas de segundo, o grado superior así formadas se regirán por las disposiciones de esta ley, y deberán inscribirse en el Departamento de Estado.

Artículo 25.2.

Organizaciones de Integración

Las organizaciones cooperativas de grado superior son las siguientes:

- a) Las centrales cooperativas.
- b) Las federaciones de cooperativas.
- c) La Liga de Cooperativas de Puerto Rico

Artículo 25.3.

Normas para Liga y Federaciones

Rigen para la Liga de Cooperativas de Puerto Rico y las federaciones de cooperativas, las siguientes normas generales:

- a) La Liga y las federaciones serán oficialmente reconocidas como personas jurídicas con arreglo a la presente ley.
- b) La Liga y las federaciones podrán realizar actividades económicas compatibles con sus necesidades y funciones como medios para la realización de sus fines.

Artículo 25.4.

Normas para Liga, las Federaciones y Centrales

Rigen para la Liga, las federaciones y las centrales, las siguientes disposiciones generales:

- a) La Liga, las federaciones y las centrales tendrán sendas juntas o asambleas generales de delegados, en calidad de órganos soberanos y formadas por los delegados de las respectivas organizaciones cooperativas integradas, que deberán ser socios activos de dichas cooperativas.
- b) Los estatutos de las centrales podrán autorizar que los delegados integrantes de sus asambleas generales de delegados ejerzan el derecho de voto en proporción al número de socios de la organización cooperativa que éstos representen.
- c) Las asambleas o juntas generales, consejos o comités de las centrales, las federaciones y la Liga serán constituidas únicamente por los delegados de las organizaciones integradas a ellas y en tanto conserven su calidad de tales.
- d) En los demás, son aplicables a la Liga, a las federaciones y a las centrales, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y fines, las disposiciones de la presente Ley referentes a la estructura orgánica y funcional de las cooperativas primarias.
- e) La Liga y las federaciones no podrán negar la incorporación a su seno de ninguna organización cooperativa que reúna los requisitos que la Ley exija.

CAPITULO 26

Centrales

Artículo 26.0.

Propósito de las Centrales

producción Las centrales cooperativas son organizaciones de fines económicos que se constituyen para realizar, al servicio de las cooperativas que las integren, de los socios de éstas o del público, actividades como las siguientes:

- a) Suministrarles máquinas, equipos, herramientas, insumos, materiales de construcción, subsistencias y otros bienes necesarios o convenientes para uso, consumo, o distribución.
- b) Comercializar y/o industrializar preferentemente los productos de las organizaciones integradas.
- c) Efectuar importaciones y exportaciones.
- d) Proveerles bienes o realizar servicios utilizables en común.
- e) Prestarles asesoría en las áreas de la especialidad de la central.

- f) Coordinar o unificar los servicios comunes de las organizaciones cooperativas integradas.
- g) Realizar cualesquiera otras actividades económicas permitidas por las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Artículo 26.1.

Normas que Rigen las Centrales

Las centrales cooperativas se rigen por las siguientes normas básicas:

1. Podrán constituirse:
 - a) Centrales cooperativas de segundo grado: integradas por cooperativas primarias del mismo o distintos tipos o por otras organizaciones cooperativas.
 - b) Centrales cooperativas de grado superior a las previstas en el inciso anterior, integradas por centrales u otras organizaciones cooperativas.
2. El número mínimo de cooperativas integrantes de una central será el que señale el Reglamento según la naturaleza de esta.
3. El radio de acción de la central será el que determinen sus cláusulas de incorporación.
4. Las organizaciones cooperativas formadas exclusivamente por cooperativas del mismo tipo podrán integrarse en una o más centrales cooperativas.
5. Las centrales cooperativas formadas exclusivamente por cooperativas del mismo tipo podrán integrarse en la federación correspondiente a éstas.

CAPITULO 27

Federaciones

Artículo 27.0.

Propósitos

Las federaciones de cooperativas son asociaciones de fines no económicos que se constituyen para realizar, por lo menos las siguientes actividades al servicio de las organizaciones cooperativas integradas en ellas:

- a) Representar y defender los intereses de las cooperativas federadas y coordinar las actividades de éstas.
- b) Vigilar la marcha de las cooperativas federadas.
- c) Practicar auditorías mediante contadores públicos autorizados en las cooperativas de su tipo o entre éstas o sus socios, cuando las partes lo soliciten.
- e) Prestar asesoría permanente a las cooperativas de su tipo que lo soliciten, primordialmente en las áreas cooperativa, jurídica, administrativa, gerencial, contable financiera, económica y educacional.
- f) Promover la constitución de nuevas cooperativas en su ramo y realizar estudios de viabilidad a petición de éstas.
- g) Fomentar la educación cooperativa.
- h) Fomentar la integración cooperativa.
- i) Efectuar operaciones económicas como medio para la realización de sus fines que no confluyan con los servicios u operaciones de sus afiliadas.
- j) Otras funciones por o para sus afiliadas.

Artículo 27.1.

Normas Básicas para las Federaciones

Las federaciones de cooperativas se rigen por las siguientes normas básicas:

- a) Podrá constituirse sólo una federación por cada tipo de cooperativa en todo el País.
- b) Una federación deberá ser constituida por no menos del veinte por ciento (20%) de las cooperativas primarias del mismo tipo.

Artículo 27.2.**Quórum en Asambleas**

Una asamblea de federación quedará debidamente constituida cuando estén representadas un número no menor de 25% de las cooperativas afiliadas o de los delegados. De no conseguirse quórum en la primera convocatoria, se hará una segunda convocatoria de asamblea en la cual el quórum será el 10% de las cooperativas afiliadas, o de los delegados. De no conseguirse quórum en la Segunda Convocatoria de la Asamblea constituirán quórum los miembros presentes en la tercera convocatoria.

Artículo 27.3.**Certificación de Socios**

La Federación podrá solicitar una certificación de socios a la cooperativa afiliada o al Inspector de Cooperativas el último cierre de operaciones de la cooperativa.

CAPITULO 28**Liga de Cooperativas****Artículo 28.0.****Liga de Cooperativas**

La Liga de Cooperativas de Puerto Rico es la asociación de tercer grado del movimiento cooperativo puertorriqueño que agrupa a las cooperativas, federaciones y centrales de cooperativas organizadas bajo esta ley o alguna otra de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

Artículo 28.1.**Funciones**

La Liga de Cooperativas ejercerá las siguientes funciones:

- a) Ejercer la representación del movimiento cooperativo.
- b) Realizar funciones de fomento, coordinación y defensa de los intereses generales del cooperativismo y del sector cooperativo.
- c) Promover relaciones de intercambio cultural y comercial entre organizaciones cooperativas en el plano nacional e internacional.
- d) Coordinar la acción del movimiento cooperativo de Puerto Rico con la acción cooperativista del Sector Público.
- e) Coordinar la representación del movimiento ante el Estado para presentar medidas necesarias y convenientes para el desarrollo cooperativo y el perfeccionamiento del Derecho Cooperativo.
- f) Realizar investigaciones y estudios de los problemas comunes del movimiento cooperativo con miras a la planificación integral de su desarrollo.
- g) Fomentar el proceso de permanente integración de las organizaciones cooperativas a todos los niveles.
- h) Fomentar, intensiva y permanentemente, la educación cooperativa en todos los niveles del movimiento cooperativo en los demás sectores.
- i) Fomentar la unificación y fortalecimiento del sistema financiero cooperativo.
- j) Defender la vigencia de los principios universales del cooperativismo y de las bases doctrinarias reconocidas o aceptadas por el movimiento cooperativo.
- k) Realizar estudios de viabilidad y fomentar la creación de nuevas cooperativas de sectores no federados.
- l) Realizar aquellas otras funciones que le sean delegadas por sus afiliadas, cónsonas con sus fines y propósitos.

Artículo 28.2.

Estructura

La Liga de Cooperativas de Puerto Rico es la organización cooperativa federada del más alto nivel de integración cooperativa y será integrada, en igualdad de derecho y obligaciones, exclusivamente, por:

- a) Las federaciones de cooperativas.
- b) Las centrales cooperativas.
- c) El Banco Cooperativo, las cooperativas de seguros, y otras instituciones cooperativas que tienen en todo caso la naturaleza jurídica de centrales, pero que por sus actividades deben cumplir con requisitos particulares del Estado.
- d) Las cooperativas de base o primer nivel, hasta tanto se desarrolle una estructura de segundo nivel que asegure la debida representación de las cooperativas de base.

La estructura organizativa de la Liga de Cooperativas será establecida en el reglamento que adopte su congreso de delegados, siguiendo el mismo procedimiento de aprobación y enmienda de los reglamentos de las cooperativas.

Artículo 28.3.

Quórum en Congresos Generales

Los Congresos de la Liga estarán legalmente constituidos cuando estén presentes un número no menor de un veinte por ciento (20%) de los delegados de sus cooperativas afiliadas, cada cooperativa tendrá derecho a un delegado en propiedad y uno suplente.

Artículo 28.4.

Aportación a la Liga de Cooperativas

Todas las cooperativas, centrales, bancos y federaciones de cooperativas, así como cualquier otra entidad organizada o que se organice bajo cualquier ley del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, estará obligada a separar anualmente no menos de la décima parte del uno por ciento (0.10%) del volumen total de sus operaciones, para contribuir al sostenimiento de la Liga. Dichas operaciones depositarán en la Liga de un máximo de cuatro mil dólares (\$4,000). Aquellas cooperativas, centrales, bancos y federaciones que durante su operación anual obtengan sobranes netos, aportarán una cantidad adicional de cinco por ciento (5%) de su sobrante neto anual hasta un máximo de tres mil dólares (\$3,000). Dentro del mes siguiente al cierre de sus operaciones de cada año económico de las cooperativas, éstas deberán haber depositado en la Liga de Cooperativas el total de las sumas que les haya correspondido pagar para ese año terminado. Los depósitos se harán trimestralmente, estimándose cada pago parcial en una cuarta parte de lo que le correspondió pagar el año precedente. Al cierre del año se harán los ajustes pertinentes y en caso de algún pago en exceso, se acreditará el pago estimado del primer trimestre siguiente.

PARTE VIII

Disolución

CAPITULO 29

Causas

Artículo 29.0.

Disolución Voluntaria

Toda cooperativa organizada de acuerdo con esta ley, podrá disolverse voluntariamente por el voto de dos terceras (2/3) partes de los socios presentes en una asamblea citada y

constituida para ese fin. La asambleas deben ser convocadas por correo con no menos de quince (15) días de antelación. El acuerdo de disolución deberá ser firmado y certificado por el presidente y el secretario de la junta de directores, y notificado al Inspector de Cooperativas.

Artículo 29.1.

Disolución Involuntaria

El Inspector de Cooperativas de Puerto Rico podrá decretar la disolución de una cooperativa:

- a) Cuando por más de dos años consecutivos haya sido imposible reunir a los socios o delegados en asamblea.
- b) Cuando una cooperativa haya estado inactiva por un período no menor de tres (3) años. Se entenderá por cooperativa inactiva, aquélla que no realiza los actos necesarios para llevar a cabo sus fines y propósitos.
- c) Cuando una cooperativa no corrija dentro de un período razonable y acorde con un plan de trabajo al efecto, las violaciones de ley señaladas por el Inspector de Cooperativas, y cuando dichas violaciones representen o pudieran representar daños irreparables para los socios o la comunidad.

CAPITULO 30

Junta de síndicos

Artículo 30.0.

Nombramientos

Al aprobarse por la asamblea el acuerdo de disolución, ésta nombrará la junta de síndicos que constará de no menos de tres miembros. Si la asamblea no elige dichos síndicos, el Inspector de Cooperativas los nombrará. En los casos en que fuere el Inspector quien decretare la disolución, éste nombrará los miembros de la referida junta. A la junta de síndicos se le requerirá un seguro de fidelidad suscrito por una compañía de seguros de Puerto Rico.

Artículo 30.1.

Obligaciones

La junta de síndicos liquidará los bienes de la cooperativas, pagará sus deudas y distribuirá el remanente, si lo hubiere, conforme a lo que se dispone más adelante. La junta de síndicos deberá notificarlo a los acreedores conocidos. La junta de síndicos deberá completar la disolución dentro del término establecido en su nombramiento por la asamblea o en su designación por el Inspector. El término así establecido puede ser prorrogado con autorización del Inspector de Cooperativas.

Artículo 30.2.

Vacantes

Toda vacante que ocurra entre los síndicos, por muerte, renuncia o separación, será cubierta mediante nombramiento hecho por los miembros restantes de esa junta de síndicos. De éstos no actuar dentro de los veinte (20) días después de ocurrir la vacante, el Inspector cubrirá la misma.

Artículo 30.3.

Destitución

Cuando el Inspector de Cooperativas considere que la Junta de Síndicos o cualesquiera de sus miembros no están realizando sus funciones de acuerdo con lo que dispone la ley,

o están actuando en contra de los intereses de la cooperativa, podrá separar a dicha junta o a cualquiera de sus miembros. Previo a la separación o destitución, el Inspector deberá notificar a dichos miembros los cargos por escrito, y ofrecer a los miembros la oportunidad de refutarlos en audiencia ante él.

CAPITULO 31

Procedimientos

Artículo 31.0.

Aviso

Luego de ser aprobada o decretada la disolución de una cooperativa, la junta de síndicos o el Inspector hará publicar un aviso de la disolución de la misma en un diario de circulación general con treinta (30) días de antelación al inicio de la liquidación. En caso de que la cooperativa en proceso de disolución no contare con los fondos suficientes para publicar el aviso en un diario, el aviso podrá publicarse en la Oficina del Colector de Rentas Internas del municipios donde esté localizada la oficina principal de la cooperativa.

Artículo 31.1.

Reclamación ante Síndicos

Cualquier socio o persona afectada que tenga una reclamación contra la cooperativa deberá establecer la reclamación ante la junta de síndicos dentro de los tres (3) meses siguientes a la publicación del aviso de disolución.

Artículo 31.2.

Distribución de Bienes

Al ocurrir la disolución de la cooperativa su activo será liquidado y distribuido en el siguiente orden:

1. Los gastos razonables incurridos por la junta de síndicos.
2. Todas las obligaciones aseguradas.
3. Todas las obligaciones excepto aquéllas surgidas por virtud de los certificados de deudas y capital a préstamo.
4. El capital a préstamo, si lo hubiere.
5. Los certificados de deudas a los tenedores de los mismos.
6. El valor a la par de las acciones comunes y preferidas, si las hubiera.

Si después de realizar la distribución antes enumerada permanecen en todo o en parte de las reservas sociales, éstas no podrán repartirse a los socios, y se destinarán o formarán parte de las economías de la federación del sector, y en su defecto, de la Liga de Cooperativas.

Artículo 31.3.

Solicitud para detener los trámites de disolución

Toda persona que tuviese intención de demandar a una cooperativa que está en trámites de disolución, y con el fin de impedir o anular dicho procedimiento de sindicatura deberá radicar la acción que corresponda ante la sala con competencia del tribunal Superior, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del aviso de disolución. Dicha acción deberá ser notificada al Inspector de Cooperativas y al presidente de la junta de síndicos o a cualquiera de los síndicos, de no haberse designado un presidente de dicha junta.

Artículo 31.4.

Solicitudes Diversas

La junta de síndicos, el Inspector de Cooperativas, todo socio afectado, y todo acreedor de la cooperativa podrán recurrir ante la sala con competencia del Tribunal Superior para solicitarle que dicte órdenes y resoluciones con respecto a los siguientes casos:

- a) De venta y disposición de cualquier propiedad remanente de la cooperativa, o de división y distribución en favor de los socios u otras personas con derecho.
- b) De pago, en su totalidad o en parte, de las reclamaciones y demandas contra la cooperativa, y de retención de fondos para estos propósitos.
- c) De existencia de cualquier fideicomiso, constituido por o para la cooperativa, si se tratara de la disposición de cualquier propiedad de la cooperativa.
- d) De aquéllos otros asuntos que requieran acción por parte de un tribunal.

Artículo 31.5.

Custodia de Documentos

El Inspector de cooperativas será el custodio de los libros y documentos de la cooperativa disuelta. Retendrá aquellos documentos que crea pertinente, por un período no menor de tres (3) años a partir de la fecha en que se haya cancelado el certificado de registro.

Artículo 31.6.

Consignación

Cuando al disolverse una cooperativa no fuere posible localizar a las personas con derecho a recibir haberes o no pudiese determinarse a quién corresponden esos haberes, el Inspector de Cooperativas queda autorizado para consignarlos judicialmente, libre de derechos, mediante el procedimiento establecido por Código Civil vigente. Los haberes así consignados y que hayan permanecido inactivos por un período de cinco (5) años o más, serán transferidos al Fondo de Investigaciones de las Cooperativas de la Oficina del Inspector de Puerto Rico.

Artículo 31.7.

Cancelación del Certificado de Registro

El informe final de la junta de síndicos, debidamente firmado y juramentado por todos sus miembros será aprobado por el Inspector de Cooperativas. Una vez aprobado el informe, el Inspector notificará al Secretario de Estado de Puerto Rico, quien procederá a registrarlo y a expedir el certificado de Disolución de la cooperativa. Copia del informe final y de dicho certificado serán conservados por el Inspector de Cooperativas.

Sub-título

Disposiciones Particulares

PARTE IX

Tipos de Cooperativas

CAPITULO 32

Disposiciones Preliminares

Artículo 32.0.

Extensión de la Ley

No deberá entenderse que los tipos de cooperativas incluidos en esta parte sean los únicos tipos que permite esta ley.

Artículo 32.1.

Disposiciones Especiales

Aquellas cooperativas que se reconocen como pertenecientes a un tipo de cooperativa que aparece regulada por esta parte, deberán regirse por las disposiciones incluidas en el capítulo correspondientes a su tipo.

Artículo 32.2.

Disposiciones Especiales sobre las Generales

Las anteriores disposiciones de esta ley, a menos que contradigan las disposiciones de esta parte, serán igualmente aplicables a toda cooperativa.

CAPITULO 33

Cooperativas Juveniles

Artículo 33.0.

Cooperativas Juveniles

Personas menores de veintiún (21) y mayores de once (11) años de edad podrán organizar y ser socios de Cooperativas Juveniles Comunes o de Cooperativas Juveniles Escolares, bajo la supervisión de la Administración de Fomento Cooperativo.

Artículo 33.1.

Capacidad

La minoría de edad no limitará la capacidad de persona alguna para actuar como incorporador o director de una cooperativa juvenil organizada bajo las disposiciones de esta ley.

Artículo 33.2.

Afiliación a Organismos

Mediante resolución al efecto de sus Juntas de Directores, las cooperativas Juveniles, escolares o comunales, podrán afiliarse a organismos cooperativos tales como la Federación de Cooperativas Juveniles y la Liga de Cooperativas de Puerto Rico una vez estos organismos establezcan mecanismos reglamentarios apropiados para canalizar la integración y participación de las cooperativas juveniles.

Artículo 33.3.

Cooperativas Juveniles Comunes

Se podrán organizar cooperativas juveniles comunales de cualquier tipo bajo los auspicios o patrocinio de cualquier entidad privada de fines no lucrativos incorporada en Puerto Rico.

Artículo 33.4.

Promoción de Cooperativas Juveniles Comunes

La Liga de Cooperativas de Puerto Rico y la Administración de Fomento Cooperativo promoverán la creación de cooperativas juveniles comunales y, de común acuerdo, elaborarán la reglamentación necesaria para dicho propósito.

Artículo 33.5.

Cooperativas Juveniles Escolares

El Departamento de Educación fomentará la organización de cooperativas juveniles en los planteles escolares de Puerto Rico como parte de su deber de difundir la educación cooperativista en todos los niveles.

Artículo 33.6.

Facultad del Secretario de Educación

Se faculta al Secretario de Educación de Puerto Rico a establecer en las escuelas públicas la enseñanza del cooperativismo entre los estudiantes que asistan a dichas escuelas.

Artículo 33.7.

División de Educación Cooperativista

El Secretario de Educación establecerá, inmediatamente después de la aprobación de esta ley, y a tenor con sus disposiciones, la División de Educación Cooperativista del Departamento de Educación. Será función de esta División de difundir la enseñanza del cooperativismo entre todos los alumnos de las escuelas públicas de Puerto Rico capacitando a los estudiantes en la teoría y la práctica del mismo.

Artículo 33.8.

Promoción de Cooperativas Juveniles Escolares

En el desempeño de las funciones que por la presente ley se le asignan, la División de Educación Cooperativista del Departamento de Educación fomentará la organización de cooperativas juveniles escolares entre los estudiantes de las diversas escuelas del País. La Administración de Fomento Cooperativo brindará toda la cooperación necesaria para el logro de este objetivo y, en coordinación con el Departamento de Educación, elaborará la reglamentación apropiada para el mismo.

CAPITULO 34

Cooperativas de Trabajo

Artículo 34.0.

Definición

Son aquellas cooperativas cuyos socios son los propios trabajadores que elaboran un producto o prestan un servicio.

CAPITULO 35

Cooperativas de Vivienda

Artículo 35.0.

Definición

Las cooperativas de vivienda son aquellas que se dedican a la administración, compra, construcción, venta, alquiler y a cualquier otra actividad relacionada con la vivienda y la convivencia comunitaria.

Artículo 35.1.

Socio

En las cooperativas de vivienda los derechos y deberes del socio aplican solamente a las personas naturales mayores de edad que integran la misma familia y que residan en la misma unidad de vivienda, según los libros de la cooperativa y en cumplimiento con el reglamento interno de la misma. Las personas jurídicas quedan excluidas de participar como socios.

Artículo 35.2.

Socio Mancomunado

Los derechos del socio original pueden ejercitarse por cualquiera de los miembros mayores de edad de su familia que residen en la misma unidad, siempre que aparezcan

registrados en los libros de la cooperativa y cumplan con las disposiciones del reglamento interno de la misma. En los libros de registro de socios de la cooperativa aparecerán los nombres y apellidos de las personas mayores de edad de la familia residente que en orden de preferencia ejercer los derechos de socio.

Artículo 35.3.

Transferencia del Derecho del Socio

De ocurrir un cambio en la condición civil de la familia que reside en la cooperativa, sea este cambio por razón de divorcio, muerte, separación u otra causa, la junta de directores deberá evaluar si la persona o familia que permanece residiendo cumple con los requisitos originales de socio. De no cumplir con dichos requisitos, se le podrá ordenar que desaloje la vivienda conforme con el procedimiento de esta ley y el reglamento.

Artículo 35.4.

Conducta indebida

Todo socio de una cooperativa de vivienda incurrirá en conducta indebida por las siguientes causas:

- a) Cuando la conducta del socio o de cualesquiera de las personas que con él cohabiten la unidad de la vivienda, fuere ilegal, o de otra índole que ocasionara una condición insalubre o peligrosa para la comunidad o para el inmueble, o constituyera un estorbo a la seguridad o tranquilidad de los vecinos.
- b) Cuando el socio o alguien integrante de la composición del núcleo familiar no cumpla con los Reglamentos de la cooperativa ni se cumplan los acuerdos de la Junta de Directores.
- c) Cuando el socio haya cedido a otra persona el uso de la unidad de vivienda en todo o en parte sin la debida autorización de la Junta de Directores, en violación al contrato escrito entre ambas partes.
- d) Cuando el socio dedique la unidad de vivienda a un propósito distinto al pactado en los contratos con la cooperativa.
- e) Cuando el socio o algún integrante de la composición del núcleo familiar altere la estructura de la unidad de vivienda por sí o a través de terceras personas a la propiedad, sea maliciosamente o por negligencia.
- f) Cuando el socio o algún integrante de la composición del núcleo familiar por sí o a través de terceras personas agrede físicamente a los empleados, residentes o personas dentro de la propiedad cooperativa.
- g) Cuando el socio o algún integrante de la composición del núcleo familiar vandalice por sí o a través de terceras personas propiedades de la cooperativa o la de alguno de sus residentes.

Artículo 35.5.

Determinación de la Junta

Cuando un socio incumple con sus obligaciones de pago a la cooperativa o incurre en conducta indebida, según la define el artículo 35.4 de esta ley, la junta de directores podrá, previa citación y vista, tomar las siguientes determinaciones:

- a) Aceptar las alegaciones del socio y archivar el caso.
- b) Amonestar al socio verbalmente o por escrito.
- c) Imponer las penalidades que por reglamento se permitan.
- d) Separarlo como socio privándolo de sus derechos como tal y concederle un término de treinta días para que desaloje la unidad. Todas las determinaciones de la Junta deberán informarse al socio en un plazo no mayor de 5 días a su última dirección conocida, personalmente o por correo certificado.

Artículo 35.6.

Procedimiento de Expulsión

En el caso de las cooperativas de viviendas, cuando la Junta de Directores determine que un socio se encuentra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones de aportaciones monetarias periódicas contraídas con la cooperativa, o haya incurrido en conducta indebida o inaceptable, según se define en el Artículo 35.4 de esta Ley, podrá separar al socio y privarlo de sus derechos y beneficios en la cooperativa, conforme al procedimiento que en adelante se establece: personas jurídicas quedan excluidas de participar como socios.

a) La Junta deberá concederle al socio la oportunidad previa de ser escuchado en vista celebrada ante ellos, previa notificación realizada por lo menos 10 días antes de la vista. La notificación se efectuará personalmente o por correo certificado a la última dirección conocida del socio.

b) La notificación deberá incluir la fecha, sitio y hora de la vista, una declaración de la autoridad legal para celebrar la vista, y una declaración corta de las alegaciones en contra del socio.

c) La vista se llevará a cabo de forma sencilla e informal, sin necesidad de cumplir estrictamente con el procedimiento que señala la Ley de Evidencia para el sistema judicial.

d) El socio podrá ir representado o asistido por un abogado.

e) Si el socio no compareciere a la vista y no justifica su ausencia, la Junta podrá proceder a separarlo como socio, privándole en su totalidad de los derechos que tenga como tal y concederle un término de 30 días para que desaloje la unidad.

Artículo 35.7.

Acudir al Tribunal en Caso de Desalojo Si la Junta determina el desalojo de una persona y ésta no cumple al cabo de los 30 días, la Junta de Directores podrá solicitar a la sala con competencia del Tribunal Superior una orden de lanzamiento para exigir el cumplimiento de la determinación. La solicitud al Tribunal tendrá prioridad de calendario por tratarse de un procedimiento sumario. Toda orden de lanzamiento del Tribunal deberá especificar el término de 40 días para el lanzamiento, a partir de la notificación de dicha orden. La orden del Tribunal deberá estar acompañada de una copia certificada de la decisión de la Junta, y ser notificada al Secretario del Departamento de Servicios Sociales y al Secretario del Departamento de la Vivienda.

Artículo 35.8.

Revisión por Tribunal

Toda persona que resulte perjudicada por la decisión final de la Junta de Directores, y haya agotado todos los recursos ante la Junta, tendrá derecho a que el Tribunal Superior revise dicha decisión. Los procedimientos para la revisión judicial habrán de iniciarse radicando en la sala con competencia del tribunal superior la petición correspondiente entro de los 15 días de haberse notificado por correo certificado la decisión final de la Junta. Copia de la petición se enviará a la Junta y a las partes envueltas. La radicación de la petición de revisión judicial no impedirá que se ponga en efecto la decisión de la Junta a menos que el tribunal revisador ordene la suspensión de la misma mientras esté pendiente la revisión, previa justificación de causa para ello. Cualquier parte que resulte perjudicada por la sentencia del Tribunal Superior podrá solicitar la revisión de dicho fallo mediante certiorari, dentro de los 15 días del archivo en autos de la decisión del Tribunal Superior.

Artículo 35.9.**Exención del Pago de Arbitrios**

Las cooperativas de vivienda estarán exentas del pago de arbitrios sobre materiales o equipo que sean adquiridos para la prestación de aquellos servicios que sean compatibles con sus fines y propósitos.

PARTE X**Agencias Reglamentarias****CAPITULO 36****Oficina del Inspector de Cooperativas****Artículo 36.0.****Otorgar permisos a las cooperativas**

El Inspector deberá otorgar un permiso escrito a toda cooperativa que hubiese cumplido con los requisitos de esta ley para que pueda comenzar sus operaciones.

Artículo 36.1.**Fiscalizar las cooperativas**

El Inspector deberá velar porque toda la cooperativa cumpla con sus cláusulas de incorporación, su reglamento interno y las disposiciones de esta ley.

Artículo 36.2.**Examinar anualmente las operaciones de las cooperativas**

El Inspector deberá examinar por lo menos una (1) vez al año las auditorías realizadas sobre las operaciones de toda cooperativa incorporada y funcionando en Puerto Rico. La auditoría podrá realizarla un auditor contratado por la cooperativa, pero el Inspector podrá revisar la auditoría y realizar todos los exámenes relacionados que considere pertinentes.

Artículo 36.3.**Atender querellas**

El Inspector deberá atender dentro del término de 90 días a partir de la radicación, las querellas presentadas por una cooperativa, socio de cooperativa o por cualquier persona afectada por una actuación de una cooperativa, junta de directores, miembros de comité, oficiales y funcionarios que aduzcan hechos constitutivos de alguna violación sustancial de ley, reglamento, cláusulas de incorporación o acuerdo interno que no pueda ser resuelto internamente por la cooperativa. Si el Inspector la considera meritoria, emitirá una decisión que podrá ser revisada conforme a la Ley Número 170 de 12 de agosto de 1988 según enmendada, conocida como «Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico».

Artículo 36.4.**Atender Consultas y Opiniones**

El Inspector deberá atender consultas y ofrecer asesoramiento técnico y emitirá opiniones sobre cualesquiera asuntos que conciernan a las cooperativas. El Inspector deberá promulgar dentro del término de noventa (90) días, un reglamento que establezca un procedimiento uniforme a seguir en casos de consultas y opiniones.

Artículo 36.5.**Otras Obligaciones de Ley**

El Inspector deberá cumplir con todas las demás funciones que esta ley le impone.

Artículo 36.6.**Requerir a Cooperativas Llevar Libros y Documentos**

El Inspector podrá requerir de las cooperativas que lleven y guarden aquellos libros y documentos que sean necesarios de acuerdo con las disposiciones de esta ley.

Artículo 36.7.**Requerir a la Corrección de Deficiencias**

El Inspector podrá tomar cualquier acción provista por esta ley para corregir las deficiencias que la haya señalado a una cooperativa, incluyendo requerirle a la junta de directores de una cooperativa que corrija dichas deficiencias o que convoque una asamblea de socios para esos propósitos.

Artículo 36.8.**Emitir Ordenes**

El Inspector, o el funcionario que éste designe podrá previa notificación y vista, emitir órdenes para cesar y desistir, y prescribir términos, condiciones correctivas que por la evidencia a su disposición, y a tenor con el derecho aplicable se determine.

Artículo 36.9.**Imponer Multas**

El Inspector, o el funcionario que éste designe, podrá imponer multas administrativas a cualquier persona natural o jurídica, hasta un máximo de dos mil dólares (\$2,000) por cualquier violación de esta ley, o de los reglamentos aprobados por la Oficina del Inspector. Si una cooperativa no sometiese a tiempo un informe requerido por el Inspector, éste le podrá imponer una multa de diez dólares (10) por cada día de retraso.

Artículo 36.10.**Acudir al Tribunal**

El Inspector podrá acudir al Tribunal Superior de Puerto Rico en solicitud de que se ponga en vigor cualquier orden por él emitida. El Tribunal dará preferencia al curso y despacho de dicha petición.

Artículo 36.11.**Establecer Reglas y Reglamentos**

Luego de la celebración de vistas debidamente anunciadas, el Inspector podrá formular, aprobar, enmendar y derogar reglas y reglamentos para cumplir con los mandatos de esta ley. Cualquier regla o reglamento emitido por el Inspector, tendrá fuerza de ley treinta (30) días a partir de haber circulado entre las cooperativas que pretenden regir.

Artículo 36.12.**Fondo de Investigaciones**

El Inspector de Cooperativas queda facultado para cobrar a toda cooperativa el costo total en que hubiere incurrido por razón o como consecuencia de los exámenes e investigaciones que efectúe en relación con dicha cooperativa, y deberá ingresar estas sumas, más las cobradas por el concepto de multas impuestas, en el «Fondo de Investigaciones de las Cooperativas». Dicho fondo podrá utilizarse para cualquier fin dispuesto por ley.

Artículo 36.13.

Procedimientos Adjudicativos Cuando por disposición de esta ley o de los reglamentos adoptados en virtud de la misma, el Inspector deba adjudicar formalmente una controversia, se observarán los procedimientos establecidos en Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como «Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico» y los reglamentos promulgados al efecto.

Artículo 36.14.

Otras Facultades

El Inspector de Cooperativas de Puerto Rico tendrá, además, todas las otras facultades que esta ley le confiere.

CAPITULO 37

Apelaciones

Artículo 37.0.

Oficial Examinador

Las decisiones del Inspector de Cooperativas podrán apelarse al Oficial Examinador de la Oficina del Inspector.

Artículo 37.1.

Procedimiento

El Oficial Examinador adoptará las reglas y reglamentos necesarios para tender las apelaciones de las decisiones del Inspector conforme a la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, enmendada, y conocida como «Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico».

Artículo 37.2.

Revisión Judicial

Las decisiones tomadas por el Oficial Examinador podrán apelarse a la sala con competencia del Tribunal Superior. PARTE XI Disposiciones Finales

CAPITULO 38

Disposiciones Finales

Artículo 38.0.

Entidades cooperativas no sujetas a esta Ley

Las organizaciones cooperativas señaladas a continuación se sujetarán a las leyes especiales citadas enseguida, así como otras normas aplicables a empresas similares:

- a) El Banco Cooperativo tiene por objeto realizar toda clase de operaciones propias de la Banca Comercial y se rige por la Ley Núm.88 de 21 de junio de 1966, según enmendada.
- b) Las cooperativas de seguros tiene por objeto realizar servicios de seguros contractuales propios de las empresas de seguros y se rigen por el Código de Seguros.
- c) Las cooperativas de ahorro y crédito tienen por objeto realizar operaciones de ahorro y crédito y otras operaciones financieras, y se rigen principalmente por la Ley Núm.6 de 15 de enero de 1990. Disponiéndose, sin embargo, que aquellas referencias a la Ley Núm.291 de 1946, según enmendada, que hace la Ley Núm.6 de 15 de agosto de 1990, arriba mencionada, serán atendidas por la presente ley como a continuación se indica:

-La presente Ley será la sustituta de la Ley Núm.291 de 9 de abril de 1946, según enmendada, conocida como «Ley General de Sociedades de Cooperativas de Puerto Rico». Las disposiciones de la presente Ley aplicarán cuando se haga referencia a la

«Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico» o la Ley 291 de 9 de abril de 1946, según enmendada que la presente sustituye.

- El Artículo 23 de la Ley Núm.291 de 9 de abril de 1946, según enmendada, al que hace referencia el Artículo 8.06 de la Ley Núm.6 de 15 de enero de 1990, queda sustituido por la Parte VIII de la presente Ley.

- El Apartado b del Inciso 1 del Artículo 22 de la Ley Núm.291 de 9 de abril de 1946 según enmendada, al que hace referencia el Artículo 8.07 (c) de la Ley Núm.6 de 15 de enero de 1990, queda sustituido por el Artículo 29.1 de la presente Ley.

- El Artículo 23-A de la Ley Núm.291 de 9 de abril 1946, según enmendada al que hace referencia el Artículo 8.08 (h) de la Ley Núm.6 de 15 de enero de 1990, queda sustituido por el Artículo 31.6 de la presente Ley.

- Para fines de la exención contributiva sobre la propiedad, el Artículo 26 de la Ley Núm.291 de 9 de abril de 1946, según enmendada, al que hace referencia el Artículo 6.09 de la Ley Núm.6 de 15 de enero de 1990, queda sustituido por el Artículo 23.1 de la presente Ley.

- Para fines de exención contributiva sobre ingresos, acciones emitidas y pago de patentes, al que también hace referencia el Artículo 6.09 de la Ley Núm.6 de 15 de enero de 1990, aplicarán los Artículos 23.0 y 23.1 de la presente Ley.

- Para fines de las referencias al Fondo de Investigación que hacen los Artículos 10.9 y 10.10.

de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, aplicará el Artículo 36.12 de la presente Ley.

Artículo 38.1.

Derogación de Leyes

Esta Ley deroga la Ley Núm.291 de 9 de abril de 1946, según enmendada.

Sección 2

Esta Ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación.

- **Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito, Ley de Ley Núm. 255 de 28 de octubre de 2002**
(P. del S. 1370)

Para adoptar una nueva “Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002”; y derogar la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, conocida como “Ley de Sociedades, Cooperativas de Puerto Rico de 1989”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus fundadores, sus miembros creen en los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. Las cooperativas se rigen por siete principios esenciales, reconocidos internacionalmente según adoptados por la Alianza Cooperativa Internacional. La versión más reciente de dichos principios fue adoptada el 23 de septiembre de 1995 en la ciudad de Manchester, y son como sigue:

1. Membresía abierta y voluntaria - Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa.

2. Control democrático de los socios - Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus socios quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa responden ante los socios. En las cooperativas de base los socios tienen igual derecho de voto (un socio, un voto), mientras en las cooperativas de otros niveles también se organizan con procedimientos democráticos.

3. La participación económica de los socios - Los socios contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa. Usualmente reciben una compensación limitada, si es que la hay, sobre el capital suscrito como condición de membresía. Los socios asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos: el desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de reservas, de la cual al menos una parte debe ser indivisible; los beneficios para los socios en proporción con sus transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras actividades según lo apruebe la membresía.

4. Autonomía e independencia del cooperativismo - Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus socios. Si entran en acuerdos con otras organizaciones, incluyendo gobiernos, o tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por parte de sus socios y mantengan la autonomía de la cooperativa.

5. Educación, capacitación e información - Las cooperativas brindan educación y capacitación a sus socios, a sus dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Las cooperativas informan al público en general, particularmente a jóvenes y creadores de opinión, acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo.

6. Cooperación entre cooperativas - Las cooperativas sirven a sus socios más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, regionales, nacionales e internacionales.

7. Compromiso con la comunidad - La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus socios.

Es política pública, del Estado Libre Asociado encaminar el desarrollo social y económico de Puerto Rico al amparo de los principios de justicia social, esfuerzo propio y control democrático del cooperativismo.

Por ello, el Movimiento Cooperativo constituye una pieza integral y un fuerte pilar para el desarrollo económico y social del país. Razón por la cual, el crecimiento y fortalecimiento del cooperativismo en Puerto Rico está revestido de alto interés público. A pesar de esa importancia, la legislación, reglamentación y fiscalización de los últimos años se ha caracterizado por la imposición de restricciones que han coartado el progreso de este sector que tanto puede aportar a la economía de Puerto Rico.

Con esta medida, y a fin de que las cooperativas de ahorro y crédito tengan la oportunidad de ser entes más competitivos y protagónicos en el desarrollo económico del país, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico promueve una amplia y plena participación de estas cooperativas en los mercados de servicios financieros. Así mismo, endosamos la aplicación de la filosofía y principios cooperativos. Por tal razón, esta Asamblea Legislativa declara como intención expresa lo siguiente:

- Permitir el libre ofrecimiento de productos y servicios por parte de las cooperativas bajo términos y condiciones similares a los demás participantes de los mercados financieros.
- Viabilizar la canalización de recursos financieros hacia el financiamiento de actividad productiva, particularmente a pequeños y medianos comerciantes, por medio de empresas cooperativas y proyectos de autogestión.

- Facilitar la creación de estructuras corporativas y cooperativas para viabilizar la incursión de las cooperativas de ahorro y crédito en las actividades permitidas a los demás participantes del mercado financiero.
- Propiciar una supervisión y fiscalización justa, eficiente y efectiva que adelante y fomente procesos de sima administración financiera fundamentados en la disciplina administrativa y la prudencia financiera.
- Propiciar el desarrollo profesional y la capacitación continua de los cuerpos directivos, funcionarios ejecutivos y empleados de las cooperativas.
- Promover la colaboración armoniosa entre cuerpos directivos y la gerencia, fundamentada en el respeto mutuo al ámbito de acción y responsabilidad de cada componente.
- Viabilizar la integración económica del sector de ahorro y crédito con otros sectores productivos.
- Adelantar, promover y facilitar la integración del sector de ahorro y crédito cooperativo, especialmente a través de estructuras de integración operacional.

Esta Ley provee al sector cooperativista de ahorro y crédito de una legislación de avanzada que atiende los reclamos de flexibilidad operacional e igualdad competitiva de este importante sector. Todo ello dentro de un marco de prudencia administrativa y financiera que viabiliza un desarrollo y crecimiento ordenado de estas importantes instituciones financieras en nuestras comunidades y pueblos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.0 1 - Título de la Ley

Esta Ley se conocerá como “Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002”.

Artículo 1.02 - Declaración de Política Pública

Es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico facilitar y adelantar el crecimiento y fortalecimiento de las cooperativas de ahorro y crédito organizadas al amparo de esta Ley, propiciar una amplia y plena participación en los mercados de servicios financieros y fomentar la ampliación de la filosofía y principios cooperativos.

Disponiéndose que, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus dependencias llevarán a cabo la implantación, aplicación e interpretación de esta Ley de conformidad con, y a los fines de adelantar, esta política pública.

Artículo 1.03 - Definiciones

A los fines de esta Ley, los siguientes términos tienen el significado que a continuación se expresa:

- “Acciones” significa la aportación económica que hace cada socio de una cooperativa al capital o patrimonio de la empresa cooperativa.
- “Acciones Preferidas” significa aquellas acciones que emita toda cooperativa de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.07(a) de esta Ley.
- “Agencia” significa cualquier departamento, oficina, administración, negociado, junta, comisión, instrumentalidad, corporación pública, dependencia o subdivisión política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo los municipios, o del Gobierno de Estados Unidos de América.
- “Banco Cooperativo” significa el Banco Cooperativo de Puerto Rico creado por la Ley Núm. 88 de 21 de junio de 1966, según enmendada.

- (e) "Capital indivisible" significa el capital reglamentario según requerido al amparo del Artículo 6.02 de esta Ley.
- (f) "Capital social" significa la suma de todas las acciones adquiridas por los socios de la cooperativa, la reserva de capital de indivisible, cualquier otra reserva requerida por ley o reglamento, las demás reservas voluntarias debidamente adoptadas por la cooperativa y las economías netas retenidas y no distribuidas.
- (g) "Comité" significa cualquier comité que se designe o se elija en una cooperativa.
- (h) "Cooperativa" significa toda sociedad cooperativa de ahorro y crédito de primer o segundo grado constituida y organizada de acuerdo con esta Ley.
Aquellas cooperativas cuyos socios sean entidades cooperativas, se considerarán como cooperativas de segundo grado.
- (i) "Cooperativas cerradas" significa toda sociedad cooperativa de ahorro y crédito de primer grado cuyos socios estén limitados a una empresa o grupo particular con exclusión de otros grupos.
- (j) "Cooperativa asegurada" significa toda cooperativa acogida al seguro de acciones y depósitos que proveerá la Corporación.
- (k) "Cooperativa de Condición Adecuada" significa aquella cooperativa de ahorro y crédito que cuente con una condición financiera y gerencial adecuada, a determinarse acorde con parámetros objetivos y uniformes que definirá la Corporación mediante reglamento.
- (l) "Corporación" significa la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas Ahorro y Crédito creada en virtud de la Ley Núm. 114 de 17 de agosto de 2001, en adelante la Corporación.
- (m) "Cuerpos Directivos" significa la Junta de Directores, comité de crédito, el comité de supervisión, el comité de educación, cualquier comité que desempeñe funciones delegadas por la Junta de Directores y cualquier cuerpo permanente de elección debidamente instituido por ley, reglamento o por el reglamento general de la cooperativa.
- (n) "Depositante" significa cualquier persona que, aun cuando no sea socio de una cooperativa, tenga depósitos en la misma.
- (o) "Depósitos" significa todos los haberes, excepto las acciones, que posea un socio o depositante en una cooperativa de ahorro y crédito y que estén evidenciados por cuentas de ahorros, certificados de depósito, cuentas de cheques, fondos de navidad, cuentas de retiro individual, cuentas en fideicomiso o cualquier otra cuenta o instrumento financiero de igual o similar naturaleza, según se determine mediante determinación administrativa o por reglamento emitido por la Corporación.
- (p) "Funcionario Ejecutivo" significa toda persona que en virtud de cualquier nombramiento o contrato de trabajo a término fijo, indefinido o temporero y mediante el pago de un salario, compensación o remuneración, ocupe un cargo de confianza, incluyendo el de Presidente Ejecutivo, Gerente, Auditor o Contralor en una cooperativa.
- (q) "Instituciones Financieras" significa aquellas instituciones financieras según así definidas en el Artículo 4(g) de la Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, según enmendada.
- (r) "Indicadores CAEL" significa el sistema de análisis financiero adoptado por la Corporación al amparo del Reglamento Núm. 5231 de 8 de mayo de 1995, según dicho sistema de análisis sea enmendado de tiempo en tiempo, sin incluir el indicador relativo a la gerencia identificado con la letra "M" (*"management"*).
- (s) "Junta" significa la Junta de Directores de toda cooperativa debidamente constituida de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.
- (t) "Oficina Principal" significa el establecimiento central o matriz en el que se ubican las oficinas de la Junta de Directores, del Presidente Ejecutivo y de los otros funcionarios ejecutivos que la Junta de Directores determine.

(u) "Oficinas de Servicio" significa aquellos establecimientos fijos o movibles en los que las cooperativas prestan servicios que no sean sucursales, incluyendo unidades de cajeros automáticos o dispositivos electrónicos similares.

(v) "Persona" significa cualquier persona natural o jurídica debidamente organizada o autorizada para hacer negocios al amparo de las leyes de Puerto Rico.

(w) "Presidente Ejecutivo" significa el principal funcionario ejecutivo de la cooperativa, designado por la Junta de Directores de conformidad con las disposiciones de los Artículos 5. 10 y 5.11 de esta Ley.

(x) "Socio" significa toda persona que sea admitida como miembro de una cooperativa de acuerdo con esta Ley y el reglamento general de dicha cooperativa; Disponiéndose que, no se admitirán como socios a personas jurídicas con fines de lucro.

(y) "Sucursales" significa los establecimientos fijos o movibles en los que la cooperativa presta de forma simultánea servicios directos de apertura de cuentas y desembolso de préstamos a sus socios y clientes.

(z) "Unidad familia" significa el cónyuge del miembro de un cuerpo directivo o de un empleado de la cooperativa; y los parientes hasta un cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, y aquellas personas que comparten con éstos su residencia legal o cuyos asuntos financieros están bajo su control legal.

CAPÍTULO II

FACULTADES Y ACTIVIDADES AUTORIZADAS

Artículo 2.01 - Fines y Propósitos

Las cooperativas de ahorro y crédito tienen como fin primordial proveer, a través del cooperativismo, acceso pleno a servicios financieros, fungir como regulador de precios, educar a sus socios sobre el mejor manejo de sus finanzas personales y familiares, promover actividad productiva mediante el auto empleo, la autogestión y el apoyo a pequeñas empresas y desarrollar líderes para el fortalecimiento del cooperativismo y de las comunidades. Para el logro de estos propósitos, las cooperativas habrán de:

(a) promover el desarrollo y fortalecimiento del cooperativismo y divulgar su filosofía a través de programas educativos;

(b) fomentar en las personas el hábito del ahorro y el uso prudente del crédito, proveyendo para ello educación sobre presupuesto personal y familiar, manejo de las finanzas personales, prevención de quiebra y otros;

(c) fomentar programas educativos dirigidos al desarrollo y capacitación técnica del liderato voluntario, liderato profesional y empleados de las cooperativas;

(d) ofrecer servicios financieros a las personas, sean o no socios de la cooperativa, bajo los términos y condiciones más favorables dentro de las circunstancias del mercado;

(e) ampliar sus capacidades de servicio de forma que se conviertan en el centro de servicios financieros de la familia puertorriqueña; y

(f) fomentar el establecimiento y operación de otras empresas cooperativas, particularmente, las que propicien el empleo y la producción agrícola, industrial, agropecuaria y las de consumo, vivienda y transportación.

Artículo 2.02 - Préstamos y Servicios Financieros a Socios

Toda cooperativa tendrá las facultades de conceder préstamos y brindar a sus socios los servicios financieros que a continuación se indican:

(a) Aceptar, recibir y manejar todo tipo de depósito de personas y de entidades privadas y públicas y ofrecer todos aquellos servicios depositarios permisibles a instituciones financieras depositarias, incluyendo:

- (1) servicios de cuentas de ahorro, cheques, certificados de depósito, y otros instrumentos, todos ellos con o sin intereses;
 - (2) facilidades o servicios de transferencias electrónicas de fondos y demás servicios de banca electrónica, incluyendo tarjetas de débito y cualquier otro método de pago por vía electrónica; y
 - (3) recibo y manejo de depósitos y cuentas de retiro individual (IRA) y otros fondos en fideicomiso, en cuentas especiales o para el pago de servicios.
- (b) Sujeto a las normas del Artículo 6.03 de esta Ley, conceder financiamiento de todo tipo, incluyendo:
- (1) préstamos personales o líneas de crédito con o sin colateral;
 - (2) préstamos para la adquisición de vehículos de motor nuevos o usados;
 - (3) préstamos para la adquisición de bienes muebles con o sin gravamen mobiliario;
 - (4) préstamos hipotecarios de todo tipo;
 - (5) préstamos para estudios que podrán estar garantizados por cualquier agencia del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o del Gobierno de Estados Unidos de América;
 - (6) préstamos en forma de servicios de tarjetas de crédito para la compra de bienes, el pago de servicios y la concesión de límites de crédito en efectivo;
 - (7) préstamos para financiamiento de primas o pólizas de seguro;
 - (8) préstamos comerciales colateralizados, sujeto a la adopción y vigencia de políticas y procedimientos de evaluación crediticia específicamente adoptadas para financiamientos comerciales implantadas a través de oficiales de crédito comercial debidamente capacitados para dicha función; y
 - (9) financiamientos de contratos de arrendamiento de propiedad mueble, sujeto a las disposiciones de ley aplicables.
- (c) Según lo autorice la Corporación mediante reglamentación o determinación administrativa, las cooperativas de condición adecuada podrán brindar todos aquellos otros servicios no cubiertos en los incisos (a) y (b) de este Artículo y que sean permisibles a otras instituciones financieras y sus subsidiarias. Al evaluar cualquier petición de autorización, así como al adoptar reglamentación al amparo de este inciso, la Corporación asegurará la participación equitativa y competitiva de las cooperativas en el mercado de los respectivos servicios en cuestión, pudiendo requerir mediante reglamentación la designación o contratación de recursos especializados y debidamente capacitados en la prestación de los servicios en cuestión. La Corporación podrá requerir que los servicios autorizados se efectúen de forma segregada a través de subsidiarias si así le es requerido a otras instituciones depositarias mediante ley o reglamentos aplicables.

Artículo 2.03 - Préstamos y Servicios Financieros a personas que no sean Socios

- (a) Toda cooperativa podrá ofrecer a personas que no sean socios, los siguientes productos, y servicios:
- (1) préstamos personales hasta el monto máximo y bajo los términos y condiciones permitidos de conformidad con la Ley 106 de 28 de junio de 1965, según enmendada, conocida como "Ley de Compañías de Préstamos Personales Pequeños"; y
 - (2) todos los servicios financieros disponibles para los socios según lo dispuesto en el Artículo 2.02 de esta Ley, sujeto a que los préstamos que se ofrezcan no excedan el monto de aquellos bienes líquidos que mantenga el deudor en la cooperativa o que garanticen el cien por ciento (100%) del préstamo. A los fines de este Artículo, se considerarán como bienes líquidos los siguientes bienes, siempre y cuando los mismos estén sujetos a un gravamen debidamente constituido y perfeccionado en favor de la cooperativa:

- (i) haberes de socios que no estén comprometidos con préstamos concedidos por la cooperativa;
 - (ii) cuentas de depósito o de valores transferibles que se mantengan en instituciones financieras autorizadas a operar en Puerto Rico; y
 - (iii) pólizas o primas no devengadas en pólizas extendidas por aseguradoras autorizadas a operar en Puerto Rico, cuyas primas respondan por el balance pendiente de pago del préstamo.
- (b) La cooperativa podrá adoptar estructuras de intereses, cargos y precios diferentes para socios y no socios.

Artículo 2.04 - Autorización para Realizar Otras Actividades Financieras

Además de los servicios y actividades financieras autorizados en los Artículos 2.02 y 2.03 de esta Ley, las cooperativas podrán realizar otras actividades financieras que a continuación se describen, sujeto a los límites y condiciones que por reglamento o determinación administrativa establezca la Corporación, las cuales asegurarán la participación equitativa y competitiva de las cooperativas en el mercado de los respectivos servicios financieros en cuestión, tales como:

- (a) hacer depósitos en otras cooperativas, en el Banco Cooperativo de Puerto Rico creado por la Ley Núm. 88 de 21 de junio de 1966, según enmendada, y en los bancos comerciales y de ahorros haciendo negocios en Puerto Rico de acuerdo con las leyes aplicables;
- (b) adquirir acciones y otros valores y depósitos de sociedades cooperativas y de organismos cooperativos de segundo y tercer grado organizados de conformidad con las leyes de Puerto Rico, incluyendo cooperativas de seguros, el Banco Cooperativo y entidades subsidiarias o afiliadas de las entidades antes mencionadas;
- (c) sujeto a las exigencias aplicables del Artículo 9.02 de esta Ley, otorgar préstamos a otras sociedades cooperativas organizadas de conformidad con las leyes de Puerto Rico, a cualquier persona jurídica, asociación, sociedad, fundación, institución, compañía o grupo de personas, corporaciones especiales de trabajadores organizadas de conformidad con las leyes de Puerto Rico, sean o no socios de la cooperativa;
- (d) tornar dinero a préstamo a corto o largo plazo de cualquier persona, entidad o agencia pública o privada, sujeto a que el préstamo no exceda el veinticinco por ciento (25%) del capital social de la cooperativa, luego de restarle cualquier pérdida acumulada. Estos requisitos no son de aplicación al depósito de fondos públicos, los cuales se regirán por la reglamentación especial que les es aplicable. No obstante lo anteriormente dispuesto, previa justificación al efecto, la Corporación podrá autorizar que el importe del préstamo exceda el límite anteriormente establecido. En los casos que sea necesario pignorar activos de las cooperativas para tomar tales préstamos y el precio en el mercado de los valores a ofrecerse en garantía excedan del ciento veinte por ciento (120%) del monto total del préstamo, la cooperativa deberá obtener el consentimiento previo, por escrito de la Corporación. Cuando se pignoren valores sin dicho consentimiento y la cooperativa incurra en problemas de insolvencia que requieran acción al amparo de la Ley Núm. 114 de 17 de agosto de 2001, la Corporación tendrá la prerrogativa, a su entera discreción, de rescindir tal transacción;
- (e) extender, aceptar, endosar, descontar, legalizar y emitir pagarés, letras de cambio, conocimientos de embargo, certificados de depósito y otros documentos -comerciales transferibles o negociables;
- (f) vender y comprar giros, cheques de viajero, recibir valores en depósito, administrar préstamos y ejecutar toda clase de cobros y pagos por cuenta ajena; comprar y vender sellos de correo, sellos de rentas internas, tarjetas prepagadas de teléfono y otros servicios y bienes similares;

(g) comprar y vender bonos, valores y otros comprobantes de deudas que no estén al descubierto del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del Gobierno de Estados Unidos de América, y los estados de Estados Unidos, así como de sus agencias, corporaciones, instrumentalidades, autoridades y subdivisiones políticas. Al invertir en tales instrumentos, en igualdad de condiciones en cuanto a rendimiento, se le dará prioridad a los del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus agencias. Asimismo, cuando se trate de bonos, valores o comprobantes de deuda los estados de Estados Unidos o de sus agencias, el valor a adquirirse deberá estar clasificado entre las dos (2) categorías superiores por una firma evaluadora de instrumentos financieros reconocida internacionalmente;

(h) establecer o afiliarse a una o más instituciones, asociaciones, corporaciones o redes de entidades o instituciones financieras relacionadas con la prestación de servicios financieros y cualesquiera otras necesidades en común de las cooperativas, incluyendo redes o asociaciones para la transferencia de fondos por medios electrónicos, sistemas de pagos y cámaras de compensación, entre otras cuyas operaciones podrán limitarse al Estado Libre Asociado de Puerto Rico o ser extensivas u originarse en cualquier lugar extranjero;

(i) operar un departamento de fideicomisos, con la autorización de la Corporación;

(j) adquirir y poseer acciones comunes y obligaciones emitidas por la Asociación Federal Nacional Hipotecaria (*Federal National Mortgage Association*), la Corporación de Préstamos Hipotecarios para la Vivienda (*Federal Home Loans Mortgage Corporation*), la Asociación Gubernamental Nacional de Hipotecas (*Government National Mortgage Association*), la Asociación Nacional de Mercadeo o de Préstamos a Estudiantes (*Student Loans Marketing Association*) o por el Banco Agrícola Federal (*Federal Land Bank*), el Banco Federal de Crédito Intermedio (*Federal Intermediate Credit Bank*) y el Banco de Cooperativas (*Bank for Cooperatives*), organizados y autorizados para hacer negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con las leyes del Congreso de Estados Unidos de América;

(k) permutar, gravar, tomar o ceder en arrendamiento los bienes inmuebles necesarios para llevar a cabo los fines y propósitos para los cuales se organice la cooperativa, sujeto a las limitaciones de las leyes y reglamentos aplicables;

(l) actuar, sujeto a la reglamentación aplicable, como depositaria de fondos públicos de cualquier naturaleza, para los cuales las agencias aceptarán como colateral los préstamos otorgados a sus socios que no tengan atrasos de más de sesenta (60) días y cuyo balance insoluto se mantenga en por lo menos el ciento veinticinco por ciento (125%) del depósito;

(m) dedicarse a la venta, solicitud, oferta o mercadeo de productos de seguros en Puerto Rico bajo cualesquiera de las siguientes estructuras:

(1) Actuando directamente por sí mismas como agentes de aseguradores cooperativos autorizados por la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como Código de Seguros, de los cuales posean certificados de aportación de fondos. Para estos fines las cooperativas estarán exentas de las exigencias y restricciones dispuestas en el Artículo 9.080 y de los incisos (1), (4) y (5) del Artículo 9.160 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como Código de Seguros de Puerto Rico.

(2) A través de subsidiarias, afiliadas o empresas cooperativas según descrito en el Artículo 2.06 de esta Ley, para la venta, solicitud, oferta o mercadeo de productos de seguros de aseguradores cooperativos autorizados de conformidad con la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como Código de Seguros de Puerto Rico, los cuales posean certificados de aportación de fondos, sin que para ello sea necesario cualificar como compañía tenedora financiera.

Las actividades de seguros de las cooperativas autorizadas en este inciso estarán sujetas al reglamento especial que habrán de adoptar conjuntamente el Comisionado de Seguros y la Corporación, cuya reglamentación asegurará una participación equitativa y competitiva de las cooperativas en la función de venta de seguros por las entidades depositarias y cumplirá con el objetivo de apoyo de unas entidades cooperativas a otras;

(n) realizar las actividades o servicios financieros que sean necesarios o convenientes para fortalecer su posición competitiva como intermediario financiero que opera en un ambiente de liberalidad reglamentaria;

(o) actuar como único incorporador de entidades subsidiarias o afiliadas al amparo de cualesquiera disposiciones estatutarias que permiten la organización de entidades jurídicas de conformidad con las leyes de Puerto Rico;

(p) ejecutar todos los actos y operaciones necesarias para llevar a cabo las actividades para las cuales se organice e incorpore la cooperativa, sujeto a las limitaciones establecidas en esta Ley y en los reglamentos adoptados en virtud del mismo, así como en la Ley Núm. 114 de 17 de agosto de 2001 y sus reglamentos; y

(q) realizar cualesquiera otras actividades que la Corporación determine administrativamente o mediante reglamento, que son incidentales a las operaciones de la cooperativa o que resulten propias de la índole de otras instituciones financieras o entidades cooperativas.

Artículo 2.05 - Autorización para Establecer Sucursales y Oficinas de Servicio

(a) Sucursales - Las cooperativas podrán establecer sucursales en unidades móviles o en establecimientos permanentes, siempre y cuando cumplan con las disposiciones y los procedimientos de esta Ley y sus reglamentos y, en todo caso, con la aprobación previa de la Corporación. Toda cooperativa que desee obtener una autorización para establecer una sucursal, sea móvil o permanente, deberá radicar ante la Corporación una solicitud, en la cual expresará la dirección exacta del lugar donde se propone establecer la sucursal o donde se proponga operar sucursales móviles.

(b) Oficinas de Servicios - Una cooperativa de condición adecuada podrá establecer oficinas de servicio sujeto a que notifique a la Corporación el establecimiento de las mismas. El establecimiento de una oficina de servicios se entenderá aprobado si la Corporación no presenta objeción dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de recibo de la notificación de la cooperativa. La objeción de la Corporación indicará expresamente los fundamentos específicos para la misma, en cuyo caso se detendrá el proceso de establecimiento de la oficina de servicios hasta tanto se retire la objeción. Las cooperativas que no sean de condición adecuada podrán establecer oficinas de servicio sujeto a la aprobación previa de la Corporación.

(c) Relocalización de Sucursales y Oficinas de Servicios - Una cooperativa de condición adecuada podrá relocalizar sus sucursales y oficinas de servicios sujeto a que notifique a la Corporación dichos traslados. El traslado se entenderá aprobado si la Corporación no presenta objeción dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de recibo de la notificación. La objeción de la Corporación deberá hacer indicación expresa de los fundamentos específicos para la misma en cuyo caso se detendrá el proceso de relocalización hasta tanto se retire la objeción. Las cooperativas que no sean de condición adecuada podrán relocalizar sus sucursales y oficinas de servicios sujeto a la aprobación previa de la Corporación.

(d) Toda notificación y toda solicitud de aprobación previa requerida al amparo de este Artículo deberá ser sometida por escrito y firmada por un oficial autorizado para realizar estas gestiones y contendrá aquella información que la Corporación disponga por reglamento. Los parámetros objetivos para la evaluación de las solicitudes serán adoptados por la Corporación mediante reglamentación.

Artículo 2.06 - Inversión en Subsidiarias, Afiliadas y Empresas Cooperativas

Una cooperativa(a) Subsidiarias cien por ciento (100%) poseídas.- Las cooperativas podrán realizar cualesquiera de las actividades que le son permitidas directamente o a través de subsidiarias cien por ciento (100%) poseídas y controladas por la cooperativa. Dichas subsidiarias podrán organizarse al amparo de cualesquiera disposiciones estatutarias que permiten la organización de entidades jurídicas bajo las leyes de Puerto Rico, incluyendo esta Ley, la Ley Núm. 50 de 4 de agosto de 1994, según enmendada, conocida como "Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico", la Ley Núm. 144 de 10 de agosto de 1995, según enmendada, conocida como "Ley General de Corporaciones de 1995", la Ley Núm. 106 de 28 de junio de 1965, según enmendada, y las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado, relativas a sociedades y fideicomisos, y bajo las disposiciones de leyes sucesoras de los estatutos antes mencionados. Independientemente de lo dispuesto en la Ley Núm. 50 de 4 de agosto de 1994, según enmendada, para fines de la creación de entidades subsidiarias, será suficiente la comparecencia de la cooperativa o su representante autorizado sin requerirse múltiples incorporadores.

La objeción de la Corporación deberá hacer indicación expresa de los fundamentos específicos para la misma, en cuyo caso se detendrá el proceso de establecimiento de la subsidiaria hasta tanto se retire la objeción. Las cooperativas que no sean de condición adecuada podrán establecer subsidiarias sujeto a la aprobación previa de la Corporación. Toda notificación requerida al amparo de este Artículo deberá ser sometida por escrito y firmada por un oficial autorizado para realizar estas gestiones y contendrá aquella información que la Corporación disponga por reglamento.

Las operaciones de la subsidiaria serán objeto de auditoría externa por un contador público autorizado. La Corporación tendrá respecto de la subsidiaria todas las facultades que posee en conformidad con esta Ley, la Ley Núm. 114 de 17 de agosto de 2001 y de cualesquiera leyes especiales que le sean aplicables.

(b) Inversión en empresas financieras de segundo grado. - Dos (2) o más cooperativas podrán establecer, organizar e invertir en instituciones o entidades dedicadas a ofrecer servicios financieros o administrativos a entidades cooperativas o a otras personas. Dichas entidades podrán organizarse al amparo de cualesquiera disposiciones estatutarias que permiten la organización de entidades estatutarias de conformidad con las leyes de Puerto Rico, incluyendo esta Ley, la Ley Núm. 50 de 4 de agosto de 1994, según enmendada, conocida como "Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico", la Ley Núm. 144 de 10 de agosto de 1995, según enmendada, conocida como "Ley General de Corporaciones de 1995", la Ley Núm. 106 de 28 de junio de 1965, según enmendada, y las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado, relativas a sociedades y fideicomisos, y de conformidad con las disposiciones de leyes sucesoras de los estatutos antes mencionados. Independientemente de lo dispuesto en la Ley Núm. 50 de 4 de agosto de 1994, según enmendada, para fines de la creación de entidades subsidiarias, será suficiente la comparecencia de la cooperativa o su representante autorizado sin requerirse múltiples incorporadores.

El establecimiento e inversión en empresas financieras de segundo grado se efectuará sujeto a las normas que adopte la Corporación, las cuales considerarán, entre otras cosas:

- (1) autorización y reconocimiento de actividades administrativas permisibles, las cuales incluirán las actividades permisibles a otras instituciones financieras y sus subsidiarias;
- (2) inversión máxima en empresas financieras;

- (3) participación de directores y funcionarios ejecutivos de las cooperativas de ahorro y crédito en los cuerpos directivos y gerencia de la empresa financiera;
- (4) controles internos y normas éticas para evitar conflictos de interés; y
- (5) controles y restricciones, si alguna, a las transacciones entre empresas afiliadas.

Las operaciones de las empresas financieras serán objeto de auditoría externa por un contador público autorizado. La Corporación tendrá respecto de estas empresas todas las facultades que posee de conformidad con esta Ley, la Ley Núm. 114 de 17 de agosto de 2001 y de cualesquiera leyes especiales que les sean aplicables.

(c) Inversión en empresas cooperativas no financieras. - Las cooperativas podrán auspiciar, promover, facilitar el financiamiento, invertir y participar como socios o tenedores de acciones preferidas en empresas cooperativas que provean servicios múltiples y en empresas cooperativas dedicadas a actividades comerciales, industriales, agrícolas o que contribuyan en cualquier otra forma, a la creación de empleos, a fomentar la producción o al desarrollo o integración del Movimiento Cooperativo. La Corporación adoptará mediante reglamentación las normas específicas que regirán la inversión de las cooperativas en las empresas cooperativas, incluyendo:

- (1) inversión máxima total en empresas cooperativas;
- (2) inversión máxima, por cada empresa cooperativa;
- (3) proporción máxima, de las acciones de la empresa cooperativa;
- (4) renglones de la economía para el desarrollo de empresas cooperativas;
- (5) participación de directores y funcionarios ejecutivos de la cooperativa de ahorro y crédito en los cuerpos directivos y gerencia de la empresa cooperativa;
- (6) controles internos y normas éticas para evitar conflictos de interés;
- (7) controles y restricciones, a las transacciones entre empresas afiliadas; y
- (8) proceso de autorización de organización o inversión en empresas cooperativas no financieras.

La reglamentación de la Corporación tendrá como objetivo viabilizar la inversión del sector de ahorro y crédito en el desarrollo de empresas cooperativas de tipos diversos, dentro de marcos de prudencia financiera y sana administración.

Los departamentos no financieros convertidos en subsidiarias al amparo de la Ley Núm. 172 de 12 de agosto de 2000 serán tratados como empresas cooperativas no financieras autorizadas al amparo de esta Ley. No se requerirá, respecto de estas subsidiarias, reducción en sus activos o en sus operaciones en virtud de limitaciones que se adopten por nueva reglamentación, en cuanto al monto total de inversión permisible en empresas cooperativas no financieras, pudiendo limitarse aumentos subsiguientes de inversión de la cooperativa matriz en caso de excederse la inversión original de los parámetros que se adopten por reglamentación.

(d) Exenciones contributivas. - Las subsidiarias cien por ciento (100%) poseídas, las empresas financieras de segundo grado y las empresas cooperativas no financieras gozarán de las mismas exenciones contributivas que concede el Artículo 6.08 de esta Ley.

(e) Las cooperativas que establezcan subsidiarias cien por ciento (100%) poseídas, empresas financieras de segundo grado o empresas cooperativas no financieras, adoptarán políticas y procedimientos razonables que preserven la identidad corporativa separada de estas entidades y la limitación de responsabilidad financiera de la cooperativa matriz; Disponiéndose que, las subsidiarias cien por ciento (100%) poseídas, empresas financieras de segundo grado o empresas cooperativas no financieras podrán utilizar la contracción "COOP" en sus nombres oficiales o comerciales.

Artículo 2.07 - Autorización para Emitir Acciones Preferidas y Obligaciones de Capital

(a) Acciones Preferidas.

(1) Sujeto a la aprobación de la Corporación, toda cooperativa podrá emitir una o más clases de acciones preferidas o una o más series de acciones en cualquiera de las clases. El total de acciones preferidas nunca podrá exceder el total de acciones comunes emitidas y en circulación. Cualquiera de ellas podrá ser de acciones con o sin valor a la par, y en las series y denominaciones, y con las preferencias y derechos relativos, de participación financiera, de opción u otros derechos especiales, condicionales, limitados o restringidos que se declaren y expresen en la resolución que disponga la emisión de las acciones aprobadas por la Junta de Directores. Salvo por dichos derechos, la tenencia de acciones preferidas no concederá derechos de voto, participación en asambleas, derecho a ser electo o a ser designado a los cuerpos directivos de la cooperativa.

(2) Cualesquiera acciones preferidas podrán ser redimibles en los plazos y a los precios, y podrán emitirse con las denominaciones, preferencias y derechos relativos, de participación financiera, de opción u otros derechos especiales y sus condiciones, limitaciones o restricciones que se consignent en la resolución que disponga la emisión de estas acciones y que apruebe la Junta de Directores con la autorización de la Corporación.

(3) Los tenedores de acciones preferidas, de cualquier clase o serie, tendrán derecho a dividendos al tipo y en las condiciones y plazos que consten en la resolución que disponga la emisión de estas acciones y que apruebe la Junta de Directores con la autorización de la Corporación. Estos dividendos serán pagaderos con preferencia sobre, o con prelación a, los dividendos pagaderos en cualquier otra clase de acciones, y serán o no acumulativos, según se haga constar. Cuando se hayan pagado dividendos sobre las acciones preferidas, de acuerdo con los términos y condiciones a que tengan derecho tales acciones, o cuando los dividendos se hayan declarado y separado para el pago, podrá pagarse dividendo sobre las restantes clases de acciones con cargo al remanente del activo que para el pago de dividendos tuviere disponible la cooperativa.

Los dividendos e intereses que devenguen las personas que adquieran o posean acciones de cualesquiera clase emitidas por una cooperativa estarán exentos del pago de la contribución sobre ingresos establecida en la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994” y de toda clase de contribución sobre propiedad mueble.

(4) Las acciones preferidas no estarán aseguradas por la Corporación, hecho que se hará constar con claridad en las circulares de oferta, en todo contrato y en cualesquiera otros documentos que evidencien las acciones preferidas. En todo momento el pago de estas acciones estará subordinado al pago de todas las obligaciones y pasivos de la cooperativa y de las obligaciones de capital. Las denominaciones, preferencias y derechos relativos, de participación financiera, de opción y otros derechos especiales de cada clase o serie, con las condiciones, cualquier cooperativa podrá emitir obligaciones de capital, previa aprobación de la Corporación. Las obligaciones limitaciones o restricciones de tales preferencias o derechos, o de ambos se consignarán en su totalidad o en resumen en el anverso o reverso del certificado que emita la cooperativa para representar dichas clases o series de acciones.

(5) La facultad de una cooperativa para emitir acciones preferidas deberá ser previamente consentida por la asamblea general de socios o de delegados, según corresponda, mediante autorización expresa consignada en el reglamento general. Una vez concedida la autorización y mientras esté vigente, será facultad de la Junta de Directores definir los términos y condiciones bajo los cuales se emitirán y ofrecerán las acciones preferidas sin necesidad de aprobaciones subsiguientes por la asamblea.

(6) Se faculta a la Corporación a definir mediante reglamentación las normas correspondientes a la aprobación de la emisión de acciones preferidas por las

cooperativas. Las acciones preferidas emitidas de conformidad con la reglamentación se considerarán como parte del capital total de la cooperativa.

(b) Obligaciones de Capital. de capital se considerarán como parte del capital de la cooperativa de acuerdo con la reglamentación que para esos efectos adopte la Corporación. Esas obligaciones de capital no podrán tener un término de vencimiento menor de cinco (5) años y deberán estar subordinadas en derecho a las obligaciones con los depositantes y con los otros acreedores de la cooperativa emisora. La Corporación podrá requerir a la Junta de Directores que suspenda el pago del principal e intereses de las obligaciones de capital a su vencimiento o antes de su vencimiento, cuando dicho pago reduzca la suma de capital en acciones, el fondo de reserva y obligaciones de capital, o cuando a su juicio dicho pago pueda afectar la solvencia financiera de la cooperativa o ponga en peligro los intereses de los depositantes y del público en general. Las obligaciones de capital podrán ser colaterales y redimibles de conformidad con los términos y condiciones que apruebe la Corporación. Ninguna cooperativa podrá adquirir sus propias obligaciones de capital o las obligaciones de capital emitidas por otras cooperativas para su cartera de inversiones.

Las obligaciones de capital se considerarán como parte del capital, pero serán presentadas y designadas separadamente en todos los estados de situación. Tales obligaciones no estarán aseguradas por la Corporación, lo cual se hará constar con claridad en las circulares de oferta, en todo contrato y en cualesquiera otros documentos que evidencien tales obligaciones. Los dividendos e intereses que devenguen las personas que adquieran o posean obligaciones de capital de cualesquiera clase emitidas por una cooperativa estarán exentos del pago de la contribución sobre ingresos establecida en la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994" y de toda clase de contribución sobre propiedad mueble.

Artículo 2.08 - Régimen Respecto de Bienes Inmuebles

Toda cooperativa podrá comprar, retener y recibir en traspaso cualesquiera bienes inmuebles para los siguientes fines exclusivamente:

(a) los que sean necesarios y convenientes para realizar sus negocios y operaciones, incluyendo el establecimiento -de sucursales, oficinas de servicios y otras, pudiendo arrendar a otros el espacio, equipado o no, que reste en una misma estructura. Para fines de este Artículo, la inversión en bienes inmuebles incluye el costo de adquisición, construcción, rehabilitación y mejoras de inmuebles propiedad de la cooperativa y todos los gastos capitalizables relativos a éstos.

Las cooperativas necesitarán la autorización anticipada de la Corporación para poder invertir en bienes inmuebles para su uso cuando la inversión exceda del veinticinco por ciento (25%) de la suma del capital social de la cooperativa, luego de restarle cualquier pérdida acumulada. Antes de conceder esta autorización, la Corporación analizará el impacto que la inversión pueda tener en la liquidez y resultados operacionales de la cooperativa utilizando para ello parámetros objetivos y uniformes que se establecerán mediante reglamentación;

(b) los que les sean transferidos en pago de deudas por los préstamos personales o hipotecarios concedidos en el curso de sus operaciones;

(c) los que adquieran en ventas judiciales, por decretos o hipotecas a favor de la cooperativa o que les den en garantía para el aseguramiento de las cantidades que se le adeuden; y

(d) en cumplimiento con su función social, y sujeto a la limitación del veinticinco por ciento (25%) dispuesto en el inciso (a) de este Artículo, bienes inmuebles que tengan valor histórico, cultural o ecológico, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- (1) el valor cultural, histórico o ecológico que esté certificado por la agencia pertinente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o del gobierno federal de Estados Unidos, tales como el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales o el Departamento de lo Interior;
- (2) la cooperativa sea una cooperativa de condición adecuada y no esté sujeta a memorandos de entendimiento, acuerdos de operación u órdenes administrativas debidamente emitidas;
- (3) la reserva de capital indivisible de la cooperativa haya alcanzado un ocho por ciento (8%) del total de activos riesgosos;
- (4) los costos de adquisición, operación, restauración y mantenimiento de la propiedad no generarán un incremento de cincuenta punto (0.50) base o más en el indicador no redondeado CAEL de la cooperativa;
- (5) la propuesta transacción no excede el justo valor en el mercado, fundamentado por una tasación emitida por un tasador que posea una licencia expedida por la Junta Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces de Puerto Rico, conforme lo requiere el Artículo 9 de la Ley Núm. 277 de 31 de julio de 1974, según enmendada, y que cumpla con los requisitos exigidos por el *"Appraiser Qualifications Board of the Appraisal Foundation"* o posea una licencia o certificación de que cumple con los requisitos del Título IX del *"Financial Institutions Reform Recovery and Enforcement Act of 1989"* (FIRREA); y
- (6) la propuesta transacción cuente con la aprobación de la asamblea general de socios o de delegados, según corresponda, y de la Corporación.

Las cooperativas deberán disponer de los bienes inmuebles que se adquieran al amparo de los incisos (b) y (c) de este Artículo, dentro de un término no mayor de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su adquisición o transferencia. Dicho término podrá ser prorrogado cuando a juicio de la Corporación así lo justifiquen los intereses de los socios, de la cooperativa o de la propia Corporación. Además, la cooperativa podrá retener dichos inmuebles adquiridos al amparo de los incisos (b) y (c) de este Artículo, si los mismos cumplen con las exigencias dispuestas en los incisos (a) y (d) de este Artículo.

La Corporación, ordenará la tasación y procederá a la venta en pública subasta de dichos bienes cuando la cooperativa no disponga de ellos en el término antes establecido o antes del vencimiento de cualquier prórroga o del permiso para dedicarlos a otra actividad autorizada que se le conceda. El precio mínimo de la primera subasta será el de la tasación que ordene la Corporación. Inmediatamente después de la venta, la Corporación entregará a la cooperativa el producto neto de la misma después de deducir los gastos incurridos.

CAPÍTULO III

ORGANIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Artículo 3.01 - Organización de Cooperativas de Ahorro y Crédito Salvo por lo dispuesto en el Artículo 2.06, de esta Ley cinco (5) o más personas naturales, mayores de edad y residentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, podrán actuar como incorporadores de una cooperativa organizada de conformidad con esta Ley. El proceso de incorporación se efectuará mediante la suscripción de un documento conteniendo las cláusulas de incorporación y el reglamento general, ambos de conformidad con las disposiciones de esta Ley, la Ley Núm. 114 del 17 de agosto de 2001, y de los reglamentos adoptados al amparo de ambas. Previo a la presentación de la documentación requerida anteriormente, todo grupo que interese organizarse como cooperativa deberá recibir orientación de la Corporación sobre las exigencias financieras y reglamentarias aplicables para el establecimiento de la nueva entidad y sobre los principios rectores de cooperativismo.

Esta orientación la ofrecerá la Administración de Fomento Cooperativo o la contratará la Corporación con la Liga de Cooperativas.

Las bases filosóficas del cooperativismo y su aplicación, mediante la organización y operación de cooperativas de ahorro y crédito, son parte esencialísima de los requisitos previos a la autorización de una cooperativa. Las exigencias financieras y reglamentarias emanan del entendimiento claro de que el cooperativismo es una manera distinta y peculiar de actividad económica, que está fundamentada en principios peculiares a este tipo de organización.

La organización de una nueva entidad cooperativa requerirá una determinación afirmativa por la Corporación a los efectos de que la misma es necesaria y conveniente para la población que va a servir y no afectará indebidamente a las cooperativas existentes, contribuyendo así al desarrollo ordenado y adecuado del Movimiento Cooperativo en Puerto Rico. Se faculta a la Corporación a adoptar mediante reglamentación, la evidencia, documentación e información que se requerirá a los proponentes y los criterios que utilizará la Corporación para llevar a cabo la determinación requerida por este Artículo. Salvo el caso de entidades organizadas o controladas por cooperativas, al cabo de sus primeros seis meses de existencia, toda cooperativa deberá contar con al menos treinta y cinco (35) socios que no tengan vínculo familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad entre sí.

Excepto por cooperativas de segundo grado cuyos accionistas, socios y/o depositantes sean, exclusivamente, cooperativas aseguradas, toda cooperativa organizada de acuerdo con esta Ley debe estar acogida al seguro ofrecido por la Corporación.

Artículo 3.02 - Cláusulas de Incorporación

El documento de las cláusulas de incorporación será juramentado por todos los incorporadores ante notario público e incluirá la siguiente información:

- (a) nombre oficial de la cooperativa, el cual incluirá las palabras "Cooperativa de Ahorro y Crédito" o las siglas "Coop" o "CAC". Ninguna cooperativa podrá adoptar un nombre similar o igual al de una cooperativa ya establecida. Esta disposición en nada limita la facultad de las cooperativas para adoptar y utilizar, individual o conjuntamente entre sí, nombres comerciales respecto de sus operaciones, servicios o productos o los de sus subsidiarias y afiliadas, todo ello sujeto al cumplimiento con las leyes aplicables;
- (b) dirección exacta del lugar donde se establecerá la oficina principal de la cooperativa a organizarse;
- (c) objetivos o fines para los cuales se organiza la misma;
- (d) valor a la par de las acciones, que no será menor de diez (10) dólares cada una;
- (e) nombre, dirección y circunstancias personales de los incorporadores, así como el número de acciones suscritas por cada uno de ellos;
- (f) el número de socios con los cuales la cooperativa comenzará operaciones; y
- (g) la cuantía de acciones con que la cooperativa comenzará sus operaciones, que no será menor de cincuenta mil (50,000) dólares, y excepto las cooperativas cerradas en donde la cuantía de las acciones podrá ser menor.

Artículo 3.03 - Trámite de Incorporación

Los incorporadores de la cooperativa someterán a la Corporación dos (2) copias del documento de las cláusulas de incorporación y un comprobante de rentas internas por la cantidad que por reglamento establezca la Corporación. Además, presentarán el original del reglamento general de la cooperativa, firmado por los miembros provisionales de su Junta y reconocido ante notario público, acompañado de dos (2) copias simples del mismo.

La Corporación examinará y evaluará las cláusulas de incorporación y el reglamento general de la cooperativa para determinar si cumplen con los requisitos establecidos en esta Ley y en los reglamentos adoptados en virtud de la misma. Una vez verificado el cumplimiento con los requisitos estatutarios de incorporación, la Corporación someterá las cláusulas de incorporación y el comprobante de rentas internas al Secretario de Estado para su registro. Asimismo, devolverá a la cooperativa el original del reglamento general y retendrá para sus archivos una copia del documento de las cláusulas de incorporación y una copia simple del reglamento general.

El Secretario de Estado expedirá el certificado de incorporación y la Corporación otorgará el permiso para operar a la cooperativa, una vez ésta cualifique y obtenga una certificación escrita para acogerse al seguro de acciones y depósitos que provee la Corporación.

Artículo 3.04 - Reglamento General

El reglamento general de toda cooperativa dispondrá de conformidad con los principios y características cooperativistas, sin que se entienda como una limitación, lo siguiente:

- (a) la manera de convocar y celebrar asambleas ordinarias y extraordinarias de socios;
- (b) la forma de votar y las condiciones bajo las cuales los socios podrán votar en asamblea ordinaria y extraordinaria, general o de distrito, de acuerdo con el principio cooperativista de “una persona, un voto”;
- (c) en caso de estar organizada por distritos, las bases para la creación y modificación de los distritos por parte de la Junta de Directores;
- (d) el número, calificaciones, poderes, facultades, obligaciones y términos de los directores y demás miembros de cuerpos directivos;
- (e) la fecha, sitio y manera de constituirse en junta, y convocar y celebrar reuniones de directores y del comité ejecutivo. Disponiéndose que, toda instrumentalidad gubernamental, incluyendo los departamentos, agencias y corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, deberán conceder tiempo laborable, a los miembros de los cuerpos directivos de las cooperativas organizadas en dichas entidades, gubernamentales con el fin de prestar un servicio esencial a sus empleados, para llevar a cabo sus gestiones. El secretario de la Junta de Directores certificará a la instrumentalidad gubernamental concernida los empleados que son miembros de los cuerpos directivos de su cooperativa, los días de reunión de éstos y la asistencia a las respectivas reuniones. El tiempo concedido a los empleados que sean miembros directivos de la cooperativa para celebrar sus reuniones, será de por lo menos: una (1) hora a la semana a los miembros del comité de crédito, y tres (3) horas al mes a los miembros de la Junta de Directores, del comité de supervisión y del comité educativo.
- (f) las causas o instancias en que la Junta podrá separar a un socio como miembro de la cooperativa y el procedimiento de apelación de las decisiones de la junta separando a un socio de la cooperativa, incluyendo la apelación ante la asamblea general de socios o delegados, según corresponda;
- (g) las causas y el procedimiento para la destitución, renuncia o sustitución de un director o funcionario;
- (h) la condición de socio; los requisitos precedentes a la condición de socio, la forma de determinar y pagar al socio su interés en la cooperativa al ocurrir su muerte, retiro, separación u otra circunstancia que le haga cesar en su condición de socio; las condiciones y fechas en que cualquier miembro dejará de serlo; y la forma y efecto de la suspensión y expulsión de un socio;
- (i) las condiciones o términos para efectuar retiros y transferencias de aportaciones o acciones;

- (j) las funciones y deberes que se podrán delegar a un funcionario ejecutivo de la cooperativa;
- (k) la forma en que las economías netas de la cooperativa puedan ser distribuidas a los socios;
- (l) las penalidades por infracciones al reglamento interno, y el procedimiento para radicar querellas;
- (m) normas sobre integración cooperativa;
- (n) el sistema de elección escalonada de los miembros de la Junta, así como el sistema para la sección de los comités para cumplir con lo dispuesto en esta Ley;
- (o) las funciones y deberes que los socios podrán delegar a la Junta de la cooperativa;
- (p) la aplicación de métodos alternos para la resolución de disputas acorde con las reglas adoptadas por la Corporación; y
- (q) la autorización a la Junta de Directores para emitir acciones preferidas según lo permite esta Ley.

Artículo 3.05 - Organización por Distritos

Las cooperativas podrán organizarse por distritos, si así se dispone en su reglamento general. En tales casos, en el reglamento general dispondrá que, la participación de los socios se encauzará a través de los delegados debidamente electos constituidos en asamblea de delegados. Además, el reglamento general establecerá el número de delegados a ser electos por cada distrito y los directores por acumulación a ser electos a la Junta de Directores en representación de la asamblea de delegados. La forma en que se constituirán los distritos deberá notificarse a la Corporación.

Artículo 3.06 - Enmiendas a las Cláusulas de Incorporación y Reglamento General

Las cláusulas de incorporación y el reglamento general de la cooperativa podrán enmendarse en cualquier asamblea general, ordinaria o extraordinaria. Las enmiendas deberán aprobarse por el voto de dos terceras (2/3) partes de los socios presentes y, en caso de las cooperativas organizadas por distrito, con el voto de dos terceras (2/3) partes de los delegados presentes.

La Junta notificará a todos los socios de la cooperativa, la celebración de la asamblea que considerará enmiendas al reglamento general o a las cláusulas de incorporación, con no menos de veinte (20) días de anticipación a la misma. Dicha notificación indicará expresamente la intención de enmendar el reglamento general o las cláusulas de incorporación, identificará las secciones o artículos del reglamento que serán objeto de enmienda y la naturaleza de las mismas e indicará que copia de los textos íntegros de las propuestas enmiendas estarán disponibles, libre de cargos, para todo socio en cualquiera de las sucursales y oficina de servicios de la cooperativa, a partir de la notificación y también en la entrada a la asamblea. En el caso de las cooperativas organizadas por distritos, los textos íntegros de las enmiendas les serán remitidos a los delegados, conjuntamente con la notificación de las propuestas enmiendas y se le garantizará a todos los socios la oportunidad de presentar sus puntos de vista sobre las enmiendas propuestas en su respectiva asamblea de distrito, de haberse convocado ésta, o por medio de sus delegados en la asamblea de delegados.

Las enmiendas a las cláusulas de incorporación o al reglamento general, debidamente certificadas por el secretario de la cooperativa, se radicarán en original y dos (2) copias ante la Corporación, conjuntamente con una certificación suscrita por el Presidente de la Junta de Directores a los efectos de que las enmiendas son cónsonas con las disposiciones de esta Ley, la Ley Núm. 114 de 17 de agosto de 2001, y los reglamentos adoptados al amparo de dichas leyes., Una vez radicadas ante la Corporación, la cooperativa someterá las enmiendas a las cláusulas de incorporación al Secretario de

Estado para su registro; Disponiéndose que, las mismas entrarán en vigor en la fecha de tal registro. En el caso de las enmiendas al reglamento general, éstas serán archivadas en el expediente de la cooperativa tan pronto sean recibidas por la Corporación y entrarán en vigor en la fecha de registro.

CAPÍTULO IV SOCIOS

Artículo 4.01 - Requisitos de los Socios

Podrán ser socios de una cooperativa, además de sus incorporadores, toda persona que no sea una persona jurídica con fines de lucro, que cumpla con los requisitos que se establezcan en las cláusulas de incorporación y en el reglamento general de la cooperativa. Los menores de edad podrán ser socios de una cooperativa, sujeto a las limitaciones establecidas en las leyes de Puerto Rico y en el reglamento general de la cooperativa. Será condición esencial para ser socio efectuar las aportaciones periódicas a la cuenta de acciones según lo disponga el reglamento general de la cooperativa.

No se podrá negar o impedir la admisión de una persona como socio de una cooperativa por razones de raza, sexo, creencias religiosas, políticas o condición social o económica, pudiendo definirse la elegibilidad de socios por grupos afines en el ejercicio del derecho constitucional a la libre asociación. La Junta podrá denegar la admisión de una persona como socio de la cooperativa cuando existan causas fundamentadas para creer que ésta puede lesionar u obstruir la consecución de los fines y propósitos de la cooperativa o haya sido expulsado como socio o haya sido separado de algún cargo en los cuerpos directivos de cualquier otra entidad cooperativa.

Artículo 4.02 - Derechos de los Socios

Los socios de toda cooperativa tendrán los siguientes derechos y prerrogativas:

- (a) participar con voz y voto en las asambleas generales de socios sobre bases de, igualdad, respeto mutuo y decoro;
- (b) elegir y ser electo para desempeñar cargos en los cuerpos directivos de la cooperativa;
- (c) utilizar los servicios de la cooperativa;
- (d) estar informado del estado de situación financiera de la cooperativa y de las operaciones y actividades que ésta lleva a cabo EL través de los informes correspondientes. Mediante requerimiento jurado en donde consigne su propósito, un socio tendrá derecho a examinar, para propósitos que se relacionen con su interés como socio, durante las horas regulares de oficina, el registro de socios y los demás libros de la cooperativa, así como de hacer copias o extractos de los mismos; Disponiéndose que, ningún socio tendrá derecho a acceder información que por disposición de ley o reglamento aplicable sea confidencial o privilegiada, incluyendo información que constituya secretos o estrategias de negocio. En caso de controversia sobre la legitimidad del propósito del socio o de la confidencialidad o privilegio que cubije la información solicitada, la controversia será adjudicada por la Corporación;
- (e) conocer el estado de sus cuentas, haberes y transacciones en la cooperativa;
- (f) participar de forma equitativa en la distribución de los sobrantes, cuando los hubiere, acorde con las normas que apruebe la asamblea general; y
- (g) recibir, al ingresar como socio, copia del reglamento de la cooperativa, de los documentos que entrega y las normas de funcionamiento de la cooperativa.

Los derechos y prerrogativas de un socio dispuestos en este Artículo, así como aquellos que les reconozca el reglamento general de la cooperativa, quedarán en suspenso en todos los casos en que el socio no esté al día en el pago de sus obligaciones y deudas

con la cooperativa, incluyendo el pago de los préstamos de los cuales sea deudor solidario y la acumulación de acciones requeridas por el reglamento general.

Artículo 4.03 - Obligaciones de los Socios

Todo socio de una cooperativa tendrá, respecto de la misma, las siguientes obligaciones:

- (a) cumplir con las cláusulas de incorporación, con el reglamento, general y con las obligaciones impuestas en ésta Ley,
- (b) efectuar las aportaciones periódicas a la cuenta de acciones según lo disponga el reglamento general de la cooperativa. Las cooperativas estarán autorizadas a incluir el pago periódico de dichas aportaciones según requeridas en el reglamento general como parte de los pagos de préstamos que se le concedan a los socios y a efectuar descuentos directos de las cuentas de depósito para efectuar dichas aportaciones;
- (c) velar por los intereses de la cooperativa y por el buen crédito y confianza pública de la misma;
- (d) cumplir con todo contrato, convenio, compromiso u obligación social o pecuniaria que contraiga con la cooperativa; y
- (e) desempeñar responsablemente las funciones de los cargos para los cuales sea electo o designado y asistir puntualmente a las reuniones de los comités a que pertenezca.

Artículo 4.04 - Registro de Socios y No Socios

Toda cooperativa llevará y mantendrá actualizado un registre, o lista de socios, el cual incluirá los siguientes particulares:

- (a) nombre, dirección y ocupación de cada uno de los socios, debiendo verificarse las credenciales e identidad de éstos;
- (b) cantidad de acciones que posea cada socio, con su correspondiente numeración, de así estarlo, y la suma pagada sobre dichas acciones; y
- (c) la fecha exacta del ingreso del socio a la cooperativa.

Además, llevará en un registro separado una información actualizada sobre los depositantes y personas que no son socios, pero reciben servicios de la cooperativa de ahorro y crédito.

Artículo 4.05 - Renuncia Voluntaria de Socios

Todo socio de una cooperativa podrá retirarse voluntariamente de la misma en cualquier momento, en cuyo caso deberá notificarlo por escrito a la Junta, con la anticipación que se requiera en el reglamento general. Esa notificación será considerada por la Junta o por los oficiales, funcionarios ejecutivos o empleados en que ésta delegue la función. Cuando el socio que se retira ocupe algún cargo en la Junta, o en algún comité, o sea, funcionario ejecutivo de la cooperativa, el retiro de sus haberes estará sujeto a las disposiciones del Artículo 6.06 de esta Ley.

Los socios que se retiren voluntariamente de una cooperativa serán responsables de todas las deudas y obligaciones que tengan pendientes con la misma a la fecha de su renuncia.

Artículo 4.06 - Causas y Procedimientos para la Separación de Socios

Los socios de una cooperativa podrán ser separados y privados de sus derechos en la misma cuando incurran en una o más de las siguientes causas:

- (a) realicen actos a consecuencia de los cuales la cooperativa se vea obligada a radicar una reclamación al amparo de la fianza de fidelidad;
- (b) incurran en mora en el pago de los préstamos que se les hayan concedido y la cooperativa se vea obligada a recurrir al garantizador del préstamo o a cualquier acción o recurso legal para el recobro del mismo;

- (c) expidan, cobren o hayan cobrado, a través de la cooperativa, cheques fraudulentos o sin fondos suficientes para su pago;
- (d) actúen en contra de los intereses, fines y propósitos de la cooperativa;
- (e) incurran en violaciones a las leyes y reglamentos que rigen a las cooperativas;
- (f) de forma intencional o mediando negligencia y en el contexto de su relación con la cooperativa, hagan cualquier declaración que sea, al momento y a la luz de las circunstancias bajo las cuales se hace, falsa o engañosa en cualquier aspecto material, que provoque o pueda provocar pérdidas a la cooperativa;
- (g) de forma intencional o mediando negligencia y en el contexto de su relación con, la cooperativa, omita consignar un hecho material necesario para evitar que una declaración sea, al momento y a la luz de las circunstancias bajo las cuales se hace, falsa o engañosa en cualquier aspecto material que provoque o pueda provocar pérdidas a la cooperativa; y
- (h) violen una orden de la Corporación.

Cuando la Junta determine que procede una acción para separar a un socio de la cooperativa como miembro de la misma, lo notificará por correo certificado al socio afectado, especificando las causas para ello. En dicha notificación le informará de su derecho a una vista administrativa, la cual deberá celebrarse no más tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación expedida por la Junta.

El socio afectado podrá asistir a la vista por sí o acompañado de abogado y tendrá derecho a examinar la prueba presentada en su contra, a contrainterrogar testigos y a ofrecer prueba a su favor. La Junta evaluará la prueba presentada, emitirá su decisión dentro, de los quince (15) días siguientes a la fecha de concluida la vista administrativa y la notificará a la parte afectada por correo certificado dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que emita su decisión. Toda decisión de la Junta separando a un socio de una cooperativa será efectiva desde la fecha de notificación al socio afectado.

Las decisiones de la Junta, separando a un socio de la cooperativa como miembro de la misma, podrán apelarse ante un panel de arbitraje, según lo dispuesto en el Artículo 7.07 de esta Ley. No obstante, todo socio que sea separado como miembro de una cooperativa será responsable de cualquier deuda u obligación que tenga pendiente con la misma a la fecha de su separación.

Las personas que sean separadas de una cooperativa por las causas establecidas en este Artículo podrán asociarse con esa u otra cooperativa nuevamente cuando exista evidencia fehaciente, a satisfacción de la Junta, de que han superado o subsanado las circunstancias que dieron base a su expulsión. Todo socio de una cooperativa que se acoja a la Ley de Quiebras deberá cumplir con los requisitos establecidos en dicha Ley antes de poder readquirir su capacidad para asumir deudas con la misma.

Artículo 4.07 - Transferencia de acciones

(a) Por parte de los socios. - Las acciones que mantienen los socios en una cooperativa serán susceptibles de venta, cesión, donación y cualquier otra transferencia de derechos o titularidad por un socio, sujeto a las siguientes condiciones:

- (1) la transferencia será efectuada solamente en favor de personas que sean elegibles para ser socios de la cooperativa;
- (2) la transferencia será efectuada mediante documento auténtico y con fecha cierta. Para que la transferencia sea efectiva, dicho documento deberá presentarse a la cooperativa para su entrada en el registro de socios. En caso de que la transferencia se efectúe a una persona que no sea elegible para ser socio, que exhiba o presente alguna de las causas que permite la expulsión de socios o que en efecto haya sido expulsado como socio de una cooperativa, la institución podrá rechazar la transferencia, procediendo a notificar la determinación a las partes envueltas;

(3) todas las transferencias de acciones que puedan afectar, reducir o menoscabar el gravamen, la protección o la garantía de préstamos y otras obligaciones para con la cooperativa serán nulas, salvo que cuenten con la aprobación expresa por escrito de la institución; y

(4) las acciones objeto de transferencia quedarán siempre sujetas a todos los gravámenes, restricciones y obligaciones a las que estaban sujetas previo a la transferencia.

(b) Las acciones que mantienen los socios en una cooperativa serán susceptibles de venta, cesión o transferencia por la cooperativa en casos de venta de carteras de préstamos o transacciones de venta de activos y asunción de pasivos, sujeto a la autorización de la Corporación. En dichos casos, las acciones de la cooperativa transferente podrán ser convertidas en acciones de la cooperativa adquirente, quedando sujetas a las disposiciones del reglamento general de dicha entidad.

CAPÍTULO V

ASAMBLEAS, JUNTA DE DIRECTORES Y COMITÉS

Artículo 5.01 - Asambleas

La asamblea general es la autoridad máxima de toda cooperativa y sus decisiones son obligatorias para sus socios presentes y ausentes, su Junta y comités, siempre que se adopten conforme a las cláusulas de incorporación, al reglamento general, los reglamentos y las leyes aplicables. En el caso de cooperativas que no estén organizadas por distritos, la asamblea general estará compuesta de los socios. Dicha asamblea general de socios se celebrará anualmente. En el caso de cooperativas que estén organizadas por distritos, la asamblea general será la asamblea de delegados. En este último caso, la cooperativa celebrará asambleas de distrito, en las que se elegirán los directores por distrito y los delegados correspondientes a cada distrito. El número de delegados a elegirse en cada distrito nunca será menor de tres (3) delegados ni menor del uno (1) por ciento del total de socios en el distrito, hasta un máximo de veinte (20) por distrito.

Las asambleas generales de socios y las asambleas generales de delegados deberán celebrarse anualmente dentro de los primeros cuatro (4) meses del año fiscal de la cooperativa. Por causa justificada y a satisfacción de la Corporación, las asambleas generales de socios o de delegados, según corresponda, podrán celebrarse en una fecha posterior a la establecida anteriormente, procurando en todo momento preservar los derechos de los socios a ser informados de los resultados de las operaciones, a elegir los delegados, directores y miembros de comités de forma oportuna y a recibir la distribución de sobrantes, si alguna, que corresponda, todo ello independientemente de que la asamblea en cuestión se considere ordinaria o extraordinaria.

Será responsabilidad de la Junta de Directores procurar la más pronta celebración de las asambleas; Disponiéndose que, en cualquier caso en que hayan transcurrido seis (6) meses o más siguientes a la terminación del año fiscal de la cooperativa sin que se hubiese celebrado la asamblea general de socios o de delegados, la Corporación emitirá una orden a la Junta de Directores para que muestre causa de porqué no procede la imposición de multas a los directores por la dilación en la celebración de dicha asamblea. La celebración de toda asamblea de distrito y de delegados, sean ordinarias o extraordinarias, deberá notificarse con no menos de diez (10) días previos a la celebración de la misma.

Artículo 5.02 – Convocatorias

La Junta de Directores podrá convocar asambleas extraordinarias, generales o de distrito, cuando lo estime conveniente. La cooperativa se verá en la obligación de convocar asambleas extraordinarias cuando lo solicite:

(a) diez por ciento (10%) del número total de socios de la cooperativa, cuando se trata de una asamblea general de socios;

(b) diez por ciento (10%) del número total de socios de un distrito, cuando se trata de una asamblea de distrito; o

(c) cincuenta por ciento (50%) del número total de delegados, cuando se trata de una asamblea general en cooperativa organizada por distritos.

La solicitud especificará los asuntos a tratar en la asamblea extraordinaria.

Artículo 5.03 - Quórum

En toda asamblea general de socios o de distrito se requerirá un quórum no menor del diez por ciento (10%) de los primeros mil (1,000) socios y del tres por ciento (3%) del exceso de mil (1,000) socios; Disponiéndose que, aquellos socios que sean menores de edad no se considerarán para fines del cómputo del quórum requerido, ni serán considerados como socios presentes para completar dicho quórum. Igualmente excluidos de ambos cómputos, estarán aquellos socios que no estén al día en sus obligaciones para con la cooperativa a la fecha de envío de la convocatoria.

En las asambleas de delegados se requerirá un quórum de una mayoría de los delegados electos. En las asambleas generales de socios o de delegados, según corresponda, el quórum nunca podrá ser menor que el número del total de miembros a elegirse para la Junta y para, los comités de crédito y supervisión.

Los miembros de la Junta y de los comités, que sean electos delegados en una asamblea deberán abstenerse de votar por sus respectivos informes o en asuntos relacionados con sus funciones.

En caso de que en una primera convocatoria no se pueda lograr el quórum requerido, se emitirá una segunda convocatoria para la asamblea, en la que constituirán quórum los socios o los delegados presentes. La segunda convocatoria nunca será anterior a dos horas más tarde de la primera convocatoria, siempre y cuando la primera y segunda convocatoria hayan sido expresamente señaladas en las notificaciones escritas remitidas a los socios o delegados, según corresponda, con una indicación expresa de que en la segunda convocatoria constituirán quórum los presentes.

Artículo 5.04 - Derecho al Voto

Los socios de una cooperativa, sean personas naturales o jurídicas, e independientemente del número de acciones que posean, tendrán derecho a un (1) voto cada uno. Ningún socio podrá emitir su voto a través de apoderado, excepto en el caso de los socios que sean personas jurídicas, las cuales podrán votar por medio de su representante autorizado. En el caso de las cooperativas organizadas por distrito, cada delegado de distrito tendrá igualmente el derecho a un (1) voto.

Artículo 5.05 - Requisitos de los Miembros de los Cuerpos Directivos

Solamente podrán ser miembros de los cuerpos directivos de una cooperativa los socios que al momento de su elección o designación y en todo momento durante su incumbencia en sus respectivos cargos, cumplan y se mantengan en cumplimiento con los siguientes requisitos:

(a) sean personas naturales;

(b) no hayan sido convictos por delito grave o menos grave que implique fraude, abuso de confianza o depravación moral. Tampoco podrán ser miembros las personas que hayan sido convictas de delito grave o de delito menos grave que impute una violación a la

honestidad o confianza pública. Toda persona que sea electa o designada a alguno de los cuerpos directivos deberá presentar a la cooperativa un certificado de antecedentes penales debidamente expedido por la Policía de Puerto Rico no más tarde de sesenta (60) días luego de su elección o designación;

(c) cumplan con el reglamento que adopte la Corporación para preservar la integridad y evitar los conflictos de interés en las cooperativas;

(d) no posean interés económico, directo o indirecto, en cualquier empresa pública o privada, con o sin fines pecuniarios, cuyos negocios estén en competencia con los negocios de la cooperativa;

(e) acrediten su capacidad para ejercer los cargos cumpliendo con todos los requisitos que se establezcan en el reglamento general de la cooperativa.

Ninguna persona que sea objeto de una declaración de incapacidad mental, total o parcial, emitida por cualquier organismo gubernamental podrá ser miembro de la Junta de Directores ni de los comités de la cooperativa;

(f) no ocupen cargos en los cuerpos directivos de ninguna otra cooperativa de ahorro y crédito;

(g) no ocupen ni hayan ocupado durante los últimos veinticuatro (24) meses puestos de funcionario ejecutivo o empleados de una cooperativa, del Banco Cooperativo ni de aseguradores cooperativos;

(h) sean elegibles para estar cubiertos por una fianza de fidelidad para las cooperativas, excepto en el caso de los miembros o aspirantes a la asamblea de delegados, a quienes no aplicará este requisito;

(i) no hayan sido expulsados como socios ni separados del cargo como miembros de un cuerpo directivo o como funcionario ejecutivo de cualquier cooperativa, por las causas establecidas en esta Ley, o como miembro de la Junta de Directores o de los comités de, o como funcionario ejecutivo de cualquier banco o banco de ahorro, según definidos en la Ley de Bancos de Puerto Rico y a Ley de Bancos de Ahorro de Puerto Rico, respectivamente, o el Banco Cooperativo de Puerto Rico;

(j) que durante los doce (12) meses previos a la elección o designación no hayan mostrado incumplimiento con ninguna de sus obligaciones y deudas con la cooperativa, incluyendo las aportaciones anuales o periódicas a su cuenta de acciones según requerido por el reglamento general de la cooperativa;

(k) tomen y aprueben los cursos de capacitación avalados por la Corporación durante el primer año de su nombramiento y cumplan subsiguientemente con las exigencias del programa de educación continuada que por reglamento adopte la Corporación. Disponiéndose, que estos requisitos no serán de aplicación a los miembros o aspirantes a la asamblea de delegados; y

(l) no podrán ser miembros de la Junta de Directores ni de los comités, las personas que a partir de la fecha de vigencia de esta Ley ocupen un puesto electivo en el gobierno central o de Alcalde, a excepción de las personas que ocupen un puesto de legislador municipal.

Toda persona que al momento de ser electa o designada a -un cargo en un cuerpo directivo muestre cualesquiera de las causas de inelegibilidad descritas en este Artículo estará impedida de ocupar y desempeñar el cargo, sin que resulte para ello necesario llevar a cabo un proceso de expulsión. En tales casos el cargo será declarado vacante y cubierto según lo dispuesto en el Artículo 5.08 de esta Ley.

Artículo 5.06 - Elección y Composición de la Junta de Directores

(a) En el caso de cooperativas de nueva formación, los incorporadores designarán la primera Junta de Directores y los respectivos comités de conformidad con las disposiciones de esta Ley, los reglamentos adoptados a su amparo y del reglamento general de la cooperativa.

(b) En el caso de cooperativas de ahorro y crédito en operación que no estén organizadas por distritos, la asamblea general de socios cubrirá, mediante elección, los cargos de la Junta cuyos términos hayan vencido.

(c) En el caso de cooperativas de ahorro y crédito organizadas por distritos que ya estén en operación, los miembros de la Junta que representen a cada distrito serán electos en la asamblea de distrito de acuerdo al número de dichos directores que según el reglamento general corresponda a cada distrito. Los cargos por acumulación de la Junta, si alguno, cuyos términos hayan vencido serán cubiertos mediante elección en la asamblea general de delegados.

(d) En casos en que por cualquier circunstancia no se pueda efectuar la elección de directores en la asamblea general ordinaria de socios o de delegados, dicha elección podrá efectuarse en asamblea extraordinaria.

(e) En todo caso, la Junta de Directores estará integrada por no menos de siete (7) ni más de quince (15) miembros.

(f) Toda persona que aspire a ser miembro de la Junta de Directores debe a la fecha de elección haberse desempeñado como socio de una cooperativa por un período de un (1) año y haber cumplido cabalmente con sus obligaciones como socio durante dicho período.

Artículo 5.07 - Términos del Cargo

(a) Norma General. - Los miembros de la Junta serán electos por un término no mayor de tres (3) años cada uno y ocuparán sus cargos hasta que sus sucesores sean electos. Los miembros de la Junta no podrán ser electos para ocupar el mismo u otro cargo de elección por más de tres (3) términos consecutivos. A los fines de esta disposición se entenderá por término de elección el período de tiempo por el cual la persona sea electa por la asamblea general de socios, la asamblea de distrito o la asamblea general de delegados, según corresponda, independientemente de que no cumpla el mismo por renuncia o por cualquier otra causa. En los casos en que un miembro de la Junta renuncie al cargo antes de expirar el primer o segundo término de su elección y sea electo nuevamente en la asamblea subsiguiente a su renuncia, dichos términos se considerarán como consecutivos.

(b) respecto de toda cooperativa. - En el reglamento general de cada cooperativa se proveerá para la elección escalonada de los miembros de la Junta, de forma que el término de elección de no menos de una tercera (1/3) parte de los miembros de dicha Junta venza en un mismo año. El tiempo de incumbencia por designación como miembro de la Junta se contará como un término únicamente cuando se ocupe el cargo por más de un (1) año. Los miembros de la Junta que ocupen cargos de elección que venzan en su último término consecutivo no podrán ser electos o designados para el mismo u otro cargo de elección en la misma cooperativa, hasta cumplidos veinticuatro (24) meses desde la fecha en que hayan cesado en su cargo.

Artículo 5.08 - Vacantes

Las vacantes que surjan entre los miembros de la Junta serán cubiertas mediante nombramiento por el voto de una mayoría de los restantes miembros incumbentes debidamente constituidos a tales efectos, sujeto a ratificación por la próxima asamblea general de socios, la próxima asamblea de distrito o la próxima asamblea de delegados, según corresponda. Cuando la cooperativa esté organizada por distritos y el miembro que ocasione la vacante sea un miembro que represente a un distrito, ésta será cubierta por la Junta con otro socio del distrito a que corresponda.

Toda persona nombrada por la Junta para cubrir una vacante comparecerá ante la consideración de la próxima asamblea general de socios, la próxima asamblea de distrito

o la próxima asamblea de delegados, según corresponda. En caso de ser ratificado por la asamblea correspondiente, dicho director ocupará el cargo hasta el vencimiento del término para el cual fue electo el director original cuya vacante fue ocupada. En caso de no ser ratificado, la asamblea procederá a elegir un director, quien ocupará el cargo hasta el vencimiento del término para el cual fue electo el director original que provocó la vacante.

Artículo 5.09 - Deberes de los Miembros de la Junta y Elección de Oficiales

Los miembros de la Junta serán los responsables de la definición y adopción de las políticas institucionales de la cooperativa, tendrán una responsabilidad fiduciaria para con ésta y sus socios y deberán actuar como un buen padre de familia en todos los asuntos de la cooperativa.

La Junta de cada cooperativa se reunirá dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de celebración de la asamblea general de socios o de delegados, según corresponda, para elegir de entre sus miembros a los oficiales de su Junta de Directores de conformidad con lo establecido en el reglamento general de la misma.

Serán elegibles para ocupar cargos oficiales en la Junta los directores que hayan ocupado el cargo de director por un (1) año o más y que hayan aprobado los cursos de capacitación requeridos en el Artículo 5.05 (k) de esta Ley.

Artículo 5. 10 - Facultades y Deberes de la Junta

(a) Es facultad, responsabilidad y deber fundamental de la Junta definir las políticas, normas y directrices generales relativas a la operación y funcionamiento de la cooperativa, de cuya implantación será responsable la gerencia bajo el mando del Presidente Ejecutivo. En el descargo de dicha responsabilidad, la Junta de Directores adoptará las siguientes políticas y normas de conformidad con las disposiciones de esta Ley y de los reglamentos que se adopten a su amparo:

(1) los parámetros y políticas de precios aplicables a los diferentes productos y servicios que ofrece la cooperativa, los cuales deberán tomar en consideración, entre otros factores, las tendencias del mercado, la obtención de rendimientos razonables que aseguren la rentabilidad y desarrollo sostenido de la institución, las necesidades de los socios y la definición de parámetros de discreción a la gerencia que le permitan la agilidad y flexibilidad operacional necesaria para asegurar la competitividad de la cooperativa;

(2) la política de inversiones de la cooperativa;

(3) las normas prestatarias de la cooperativa;

(4) Las normas y políticas institucionales para la compensación o remuneración por servicios prestados que devengarán los funcionarios ejecutivos y los empleados de la cooperativa;

(5) la política educativa de la cooperativa;

(6) la política de mercadeo;

(7) las políticas relativas a los recursos humanos, incluyendo como mínimo una política contra el hostigamiento en el empleo, política de igualdad de oportunidad de empleo, las licencias y beneficios que disfrutarán los empleados, políticas internas de empleo relativas a conflicto de intereses, políticas internas sobre asistencia, puntualidad y otros aspectos pertinentes al trabajo que se realiza en la cooperativa.

Además, una política sobre conducta y acciones disciplinarias, y las normas para la compensación o remuneración por servicios prestados que devengarán los funcionarios ejecutivos y los empleados de la cooperativa;

(8) el presupuesto operacional de la cooperativa; y

(9) el Código de Ética aplicable a miembros de cuerpos directivos y empleados de la cooperativa.

(b) Además, la Junta de toda cooperativa tendrá las siguientes facultades y deberes:

- (1) nombrar al Presidente Ejecutivo de la cooperativa, el cual desempeñará las funciones gerenciales y administrativas de la cooperativa y ejercer á las funciones, deberes y responsabilidades adicionales que le delegue la Junta. Será deber y prerrogativa del Presidente Ejecutivo nombrar todos los demás funcionarios y empleados de la cooperativa, así como desempeñar las funciones gerenciales y administrativas de la cooperativa, incluyendo la implantación de la política institucional que establezca la Junta;
- (2) velar por la implantación y el cumplimiento de las políticas institucionales. Además, la Junta supervisará y evaluará el desempeño del Presidente Ejecutivo;
- (3) definir las normas para la aprobación de las solicitudes de ingreso y de retiro de socios. La función de considerar y aprobar las solicitudes de ingreso y de retiro efectuadas al amparo de las normas definidas por la Junta corresponderá a los funcionarios o empleados de la cooperativa que a esos fines designe el Presidente Ejecutivo, quien rendirá a la Junta un informe mensual al respecto;
- (4) decretar la separación de socios por las causas y de conformidad con el procedimiento que se establece en el Artículo 4.06 de esta Ley;
- (5) asegurar que todos los miembros de la Junta, de los comités de la cooperativa, los funcionarios ejecutivos, empleados y toda persona que maneje fondos de la cooperativa, estén cubiertos por una fianza de fidelidad por la cuantía y forma en que se establezcan en el reglamento que adopte la Corporación. Toda persona que sea inelegible o a la que se le cancele una fianza de fidelidad no podrá ocupar ninguno de los cargos, posiciones o empleos antes mencionados;
- (6) someter a la asamblea anual general de socios o de delegados, según corresponda, sus recomendaciones de enmiendas al reglamento general y a las cláusulas de incorporación de la cooperativa;
- (7) velar que todos los riesgos asegurables estén adecuadamente cubiertos por seguros, de manera que la cooperativa no sufra pérdidas por concepto de contingencias o riesgos asegurables;
- (8) convocar las asambleas de socios o de delegados, sean ordinarias o extraordinarias, para considerar las acciones que deban llevarse a la atención de todos los socios o delegados;
- (9) nombrar, a su discreción, un comité ejecutivo integrado por no menos de tres (3) miembros de la Junta para que ejecute los acuerdos y decisiones que ésta le delegue;
- (10) designar los miembros del comité de educación de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, así como aquellos otros comités que sean necesarios y convenientes para llevar a cabo los propósitos de la institución;
- (11) asignar a los comités de la cooperativa los recursos razonables para realizar sus funciones. Será condición previa a la asignación de dichos recursos que los comités preparen un plan de trabajo específico y concreto, cónsono con la política administrativa y operacional de la cooperativa que cuente con la aprobación expresa de la Junta.
- (12) definir los parámetros para la contratación de servicios de consultores, asesores, abogados y otros profesionales, cuya orientación y servicios sean necesarios y convenientes para el funcionamiento de la cooperativa o para la planificación y desarrollo de sus actividades y el logro de sus metas y objetivos;
- (13) desempeñar cualesquiera otros deberes, obligaciones y facultades dispuestas en esta Ley y en el reglamento general de la cooperativa y ejercer todas las responsabilidades inherentes a una Junta de igual naturaleza; y
- (14) llevar a cabo la contratación de los contadores públicos autorizados que estarán a cargo de realizar anualmente la intervención de cuentas.

Artículo 5. 11 - Funciones y Responsabilidades del Presidente Ejecutivo

Actuando de conformidad con las políticas institucionales adoptadas por la Junta de Directores de la cooperativa, el Presidente Ejecutivo tendrá las siguientes funciones y responsabilidades:

- (a) implantar las políticas institucionales adoptadas por la Junta.
- (b) seleccionar, reclutar, supervisar, evaluar y remover todo el personal de la cooperativa conforme con las políticas institucionales adoptadas por la Junta.

Además, tendrá la responsabilidad de coordinar y supervisar las unidades administrativas y asegurar la eficiencia de los procedimientos gerenciales y financieros;

- (c) desarrollar e implantar un programa de capacitación gerencial y de educación cooperativa que cubra áreas técnicas de administración, mercadeo, contabilidad y finanzas y que le capacite sobre los principios y filosofía cooperativista;

- (d) elaborar e implantar los programas de cumplimiento reglamentario que aseguren el fiel cumplimiento de las leyes y reglamentos locales y federales aplicables a las operaciones de la institución;

- (e) formular un plan de negocios de la cooperativa, el cual deberá propiciar un desempeño financiero adecuado y sostenido mediante la adopción de metas, estrategias y objetivos operacionales que se puedan medir y que le ofrezcan dirección a la cooperativa. De estimarlo apropiado, el Presidente Ejecutivo identificará los recursos profesionales externos que le asistan en la formulación de dicho plan, cuya contratación se efectuará en cumplimiento con las normas y políticas de contratación de la institución. Dicho plan requerirá la aprobación final de la Junta de Directores. El Presidente Ejecutivo ejercerá la autoridad administrativa para implantar los acuerdos de política institucional y las directrices del plan de negocios de la institución y elaborará los planes de trabajo anuales que correspondan al logro de las metas, estrategias y objetivos del plan de negocios de la cooperativa;

- (f) formular el proyecto de presupuesto, el cual será sometido a la Junta de Directores para su consideración y aprobación antes de comenzar el año operacional de la cooperativa; y

- (g) mantener informada a la Junta de Directores sobre la condición operacional, administrativa y financiera de la cooperativa, para lo cual rendirá informes ordinarios mensuales a la Junta de Directores, así como aquellos otros informes especiales que a su juicio o a juicio de la Junta de Directores sea meritorio someter.

Artículo 5.12 - Elección y Composición del Comité de Supervisión

En la primera asamblea general de socios o de delegados de toda cooperativa, se elegirá entre los socios un comité de supervisión, el cual estará integrado por tres (3) miembros. Los miembros del comité de supervisión serán electos por un término no mayor de tres (3) años cada uno, quienes ocuparán sus cargos hasta que sus sucesores sean electos. En lo que respecta a su reelección, los miembros del comité de supervisión estarán sujetos a las mismas limitaciones que los miembros de la Junta. En el reglamento general de toda cooperativa se proveerá para la elección escalonada de los miembros del mismo por la asamblea general de socios o de delegados, según corresponda, de forma que el término de elección de no más de una tercera (1/3) parte de los miembros de dicho comité venza en un mismo año.

Cuando ocurra una vacante entre los miembros del comité de supervisión, los miembros restantes designarán a un socio elegible para cubrir la vacante, sujeto a ratificación por parte de la próxima asamblea general de socios o de delegados, según corresponda. Toda persona nombrada para cubrir una vacante comparecerá ante la consideración de la próxima asamblea general de socios o de delegados, según corresponda. En caso de ser ratificado por la asamblea correspondiente, dicho miembro del comité ocupará el cargo hasta el vencimiento del término para el cual fue electo el miembro del comité original.

cuya vacante fue llenada. En caso de no ser ratificado, la asamblea procederá a elegir un miembro, del comité, quien ocupará el cargo hasta el vencimiento del término para el cual fue electo el miembro del comité original que provocó la vacante.

Artículo 5.13 - Funciones del Comité de Supervisión y Auditoría

El comité de supervisión y de auditoría de cada cooperativa tendrá, además de cualesquiera otras que se dispongan en esta Ley o en sus reglamentos, las siguientes funciones y responsabilidades:

- (a) asistir a los auditores internos y externos en el examen de las cuentas y operaciones de la cooperativa y realizar las intervenciones que considere necesarias o convenientes para los mejores intereses de la cooperativa;
- (b) recibir y analizar los informes de auditores externos y de la Corporación;
- (c) rendir a la Junta un informe sobre el resultado de los exámenes de la cooperativa, no más tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que concluya el mismo;
- (d) rendir un informe escrito a la asamblea general y a la Corporación, sobre la labor realizada por dicho comité durante el año, entendiéndose que el comité no deberá pronunciarse sobre la efectividad o eficiencia de las actuaciones administrativas de la Junta. Dicho informe no incluirá información que por disposición de ley o reglamento aplicable sea confidencial o privilegiada. El comité de supervisión y auditoría presentará y discutirá este informe con la Junta no más tarde de los veinte (20) días anteriores a la celebración de dicha asamblea;
- (e) entender como mediador en cualquier controversia de socios que surja en la aplicación de disposiciones normativas y reglamentarias de la cooperativa, siempre y cuando no sean controversias obrero patronal;
- (f) asegurarse de que la cooperativa cumple con las recomendaciones contenidas en las auditorías realizadas, vigilará la legalidad de los actos de la Junta y la gerencia, la veracidad de los informes que éstos presentan a los socios, y la seguridad de los bienes de la cooperativa;
- (g) solicitar a la Junta de Directores que contrate el personal que necesite el comité para llevar a cabo sus funciones y descargar las responsabilidades, con sujeción a la asignación de fondos que autorice la Junta, de acuerdo con el plan de trabajo presentado por el comité;
- (h) el comité de supervisión podrá recomendar a la asamblea general la suspensión o separación de cualquier miembro de la Junta o de otro comité que haya incurrido en las violaciones a las disposiciones de esta Ley, previa formulación y notificación de los cargos y celebración de una vista ante el comité. La persona imputada podrá asistir a la vista acompañada de abogados; y
- (i) desempeñar todas aquellas otras funciones que le sean asignadas por la asamblea.

Artículo 5.14 - Designación y Composición del Comité de Crédito

La Junta designará un comité de crédito, integrado por no menos de tres (3) miembros en propiedad y dos (2) miembros suplentes, quienes ejercerán las funciones de aquellos que ocupen los cargos en propiedad en todo caso de ausencia temporera. Los miembros del comité de crédito serán designados por un término no mayor de un (1) año cada uno y ocuparán sus cargos hasta que sus sucesores sean nombrados y podrán ser redesignados en sus puestos. Las vacantes que surjan entre los miembros del comité de crédito serán cubiertas por la Junta por el término no cumplido por éstos.

Además, la Junta podrá designar oficiales de crédito, a quienes les podrá delegar la facultad de evaluar las solicitudes de préstamos y autorizar su concesión, hasta los límites máximos que fije la Junta. Dichos oficiales deberán informar al comité de crédito todas las solicitudes que denieguen, para que éste tome la acción pertinente y rendirán al comité de

crédito, con la frecuencia que establezca la Junta, pero no menos una (1) vez al mes, un informe escrito sobre los préstamos que autoricen y denieguen.

Artículo 5.15 - Funciones del Comité de Crédito

El comité de crédito de toda cooperativa tendrá, además de cualesquiera otras dispuestas en esta Ley o en sus reglamentos, las funciones y responsabilidades que a continuación se indican:

(a) considerar, aprobar o denegar préstamos por cantidades en exceso de aquéllas que los oficiales de crédito estén autorizados a conceder, pero hasta los límites máximos que fijen las normas prestatarias que establezca la Junta.

Las solicitudes de préstamos de los miembros de los cuerpos directivos, el comité de supervisión y los funcionarios ejecutivos en exceso de sus acciones y depósitos, se considerarán en una reunión donde esté presente un miembro del comité de supervisión, quien participará con voz y voto en dicha reunión;

(b) evaluar y someter a la Junta para la consideración y decisión final las solicitudes de préstamos por cantidades que excedan los límites máximos que el comité esté autorizado, a conceder;

(c) revisar y analizar los informes de los oficiales de crédito sobre los préstamos que éstos concedan o denieguen y rendir a la Junta un informe al respecto; y

(d) rendir a la Junta un informe mensual sobre los préstamos que el comité conceda o deniegue.

El comité de crédito se reunirá cuantas veces sea necesario para el desempeño de sus funciones, previo acuerdo de éste o convocatoria al efecto de su presidente o del Presidente Ejecutivo.

Artículo 5.16 - Designación y Composición del Comité de Educación

La Junta designará un comité de educación para que desarrolle un programa de educación cooperativa, según las normas que adopte la Junta de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. Este comité estará integrado por no menos de tres (3) ni más de siete (7) socios, de los cuales por lo menos la mitad no podrán ser miembros de la Junta, ni de otros comités de la cooperativa. Los miembros del comité de educación desempeñarán sus cargos por un término de un (1) año y ejercerán sus cargos hasta que sus sucesores sean nombrados y podrán ser redesignados en sus puestos por la Junta de Directores. Las vacantes que surjan entre sus miembros del comité de educación serán cubiertas por la Junta por el término no cumplido del miembro saliente.

Artículo 5.17 - Política de Educación

La Junta de Directores adoptará una política educativa conducente a la educación de socios, cuerpos directivos, gerentes y empleados, dirigida a facilitar y propiciar:

(a) la generación de nuevos líderes voluntarios con conocimientos técnicos financieros;

(b) la educación financiera personal a nivel individual y familiar con miras al desarrollo de un mejor consumidor de crédito, reducir la incidencia de quiebras y estimular el ahorro y la inversión en actividades productivas; y

(c) la educación sobre los principios rectores, doctrinas, naturaleza y beneficios del cooperativismo, particularmente a jóvenes y creadores de opinión.

La Junta de Directores proveerá en el presupuesto de la cooperativa los recursos necesarios para la implantación de la política de educación y supervisará de forma continua la ejecución e implantación de la misma. Las partidas presupuestarias asignadas para educación estarán destinadas a la prestación de servicios educativos directos. El contenido doctrinario sobre cooperativismo de la política de educación deberá basarse en los principios aprobados por la Liga de Cooperativas.

Será obligación expresa de la Corporación constatar el uso del presupuesto asignado para la prestación de servicios educativos directos. Lo dispuesto en este Artículo será sin menoscabo de las obligaciones de la cooperativa, sus cuerpos directivos y empleados de cumplir con los requisitos de educación continuada dispuestos por la Corporación en virtud de la Ley 114 del 17 de agosto de 2001.

Artículo 5.18 - Funciones del Comité de Educación

El comité de educación de cada cooperativa tendrá las siguientes funciones y responsabilidades:

(a) de acuerdo con la política de educación que establezca la Junta, preparar un plan de trabajo:

(1) atienda las necesidades de capacitación de los miembros de cuerpos directivos sobre las materias inherentes a las funciones que desempeñan;

(2) brinde educación al personal de la cooperativa sobre los principios, métodos y características del cooperativismo y la gestión empresarial de la cooperativa;

(3) brinde información a la comunidad sobre los beneficios y servicios de la cooperativa y del cooperativismo en general; y

(4) coordine los procesos educativos y de capacitación para el desarrollo de nuevos líderes cooperativistas y futuros miembros de los cuerpos directivos.

(b) rendir a la Junta un informe escrito semestral sobre la labor realizada en el término, a que corresponda el mismo; y

(c) rendir a la asamblea general un informe anual sobre sus actividades y logros.

Artículo 5.19 - Compensación y reembolso de gastos

(a) Ninguno de los miembros de los cuerpos directivos recibirá compensación o remuneración alguna por el desempeño de sus funciones. No obstante, el reglamento general de la cooperativa podrá autorizar el pago de una dieta por asistencia a reuniones oficiales, sujeto a las reglas que específicamente adopte la Corporación a tales fines. Dichas reglas dispondrán, entre otras cosas, la suma máxima permisible por reunión, la suma máxima anual permisible por este concepto y prácticas prohibidas en tomo al pago de estas sumas.

(b) Además, la cooperativa podrá reembolsar los gastos razonables en que realmente incurran los miembros de cuerpos directivos en el desempeño de sus funciones, previa evidencia documental de los mismos, de acuerdo con el reglamento que adopte la Junta de Directores de cada cooperativa. Se faculta, además, a la Corporación para adoptar reglamentación específica sobre esta materia, la cual podrá definir cuantías razonables y prácticas prohibidas en tomo al reembolso de gastos. Será responsabilidad de la Junta de Directores velar por el fiel cumplimiento de las normas dispuestas en el reglamento de la cooperativa y en la reglamentación adoptada por la Corporación sobre este particular.

(c) Los pagos efectuados al amparo de este Artículo sólo cubrirán gastos de viajes oficiales que adelanten de forma específica los intereses de la cooperativa y que beneficien a ésta. El detalle de todas las sumas pagadas por este concepto será divulgado de forma expresa en el informe anual distribuido a los socios.

(d) Ninguna cooperativa que durante dos (2) años consecutivos haya dejado de distribuir sobrantes entre sus socios podrá efectuar pago alguno a los miembros de los cuerpos directivos.

(e) Todo pago de comisión, incentivo, beneficio, promoción o cualquier otra cosa de valor que reciba la cooperativa, será para beneficio exclusivo de ésta y no aprovechará ni beneficiará a ningún miembro de los cuerpos directivos, al Presidente Ejecutivo ni a ningún empleado.

(f) Nada de lo anterior restringirá la facultad de las cooperativas para proveer a los funcionarios ejecutivos y a los miembros de los cuerpos directivos los seguros necesarios para que se proteja a cada uno de ellos mientras se encuentren realizando las funciones de sus cargos. Además, la cooperativa podrá adquirir para éstos los siguientes seguros:

- (1) seguro de vida;
- (2) seguro contra cáncer y enfermedades perniciosas;
- (3) seguro de responsabilidad pública; y
- (4) seguros diseñados por las cooperativas de seguros específicamente para funcionarios y miembros de los cuerpos directivos en funciones oficiales.

Artículo 5.20 - Lista de Directores y Miembros de Comités

Toda cooperativa deberá remitir a la Corporación y a la Liga de Cooperativas una lista completa de los miembros de sus cuerpos directivos indicando la posición oficial que ocupe cada uno de ellos.

Estas listas deberán acompañarse con cualquier otra información relacionada que requiera la Corporación y se enviarán no más tarde de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que los miembros sean electos o designados. En caso de vacantes deberá enviarse a la Corporación y a la Liga de Cooperativas, una notificación escrita indicando el nombre del miembro del cuerpo directivo que ocasione la vacante y del sustituto de éste, no más tarde de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que el sustituto tome posesión del cargo.

Artículo 5.21 - Causas para la Separación de los Miembros de los Cuerpos Directivos

Todo miembro u oficial de los cuerpos directivos podrá ser separado de su cargo por las siguientes causas:

- (a) incurrir en cualesquiera de los actos constitutivos de causa para la separación de los socios de una cooperativa que se establecen en el Artículo 4.06 de esta Ley;
- (b) violar las disposiciones de esta Ley, la Ley Núm. 114 de 17 de agosto de 2001, conocida como Ley de la Corporación o cualesquiera de las leyes aplicables a las operaciones de la cooperativa o de los reglamentos adoptados u órdenes administrativas debidamente emitidas en virtud de dichas leyes y reglamentos;
- (c) violar las cláusulas de incorporación o el reglamento general de la cooperativa;
- (d) incurrir en conducta constitutiva de violación de sus deberes fiduciarios;
- (e) dejar de ser elegible, de acuerdo con esta Ley y sus reglamentos, para el cargo que ocupe o que su participación en los asuntos de la cooperativa sea lesiva a los mejores intereses o a la solvencia económica de la misma;
- (f) observar un patrón de ausencias sin que exista justa causa para ello. El Código de Ética de cada cooperativa contemplará las normas, parámetros y procedimientos pertinentes a este asunto;
- (g) observar prácticas inadecuadas en el desempeño de sus funciones en la cooperativa;
- (h) dejar de cumplir con los requisitos dispuestos en el Artículo 5.05 de esta Ley; e
- (i) impedir, dificultar o interferir indebidamente por acción u omisión intencional o negligente, que se convoque o celebre cualesquiera de las asambleas de la cooperativa según lo dispuesto en esta Ley, los reglamentos adoptados a su amparo, el certificado de incorporación de la cooperativa o el reglamento general de ésta.

Artículo 5.22 - Procedimientos Para la Separación

(a) Los miembros de los cuerpos directivos podrán ser separados de sus cargos, según se dispone a continuación:

(1) A petición de los socios - Todo socio podrá iniciar un procedimiento de separación contra un director radicando, ante el secretario o presidente de la cooperativa y con copia al comité de supervisión, una solicitud escrita que exponga los cargos imputados, firmada por el cinco por ciento (5%) de todos los socios o por el diez por ciento (10%) de los delegados.

(2) A petición de los directores - Todo director podrá iniciar un procedimiento de separación contra otro director, radicando ante el secretario o presidente de la Junta de Directores y con copia al comité de supervisión, una solicitud escrita que exponga los cargos imputados, firmada por dos terceras (2/3) partes de los restantes miembros de la Junta.

Toda solicitud de remoción presentada a iniciativa de los socios, delegados o directores será sometida ante la consideración de la próxima asamblea general, que podrá ser, extraordinariamente convocada para tal efecto. Dicha asamblea podrá separar al Director de la Junta, con el voto concurrente de la mayoría de los socios o delegados presentes, según corresponda.

El miembro de la Junta afectado por una decisión de la asamblea separándolo del cargo, tendrá derecho a someter a la consideración de la próxima asamblea general, que podrá ser extraordinariamente convocada para tal efecto, una petición escrita de reconsideración de su remoción. La decisión de la asamblea podrá apelarse ante un panel de arbitraje, según lo dispuesto en el Artículo 7.07 de esta Ley.

(b) Oficiales de la Junta - Los oficiales de la Junta podrán ser separados de sus funciones por el voto de una mayoría de los miembros de la misma, previa notificación de las causas por las cuales se les separa del cargo. La decisión de la Junta será a los únicos efectos de relevarlo de las funciones como oficial de la Junta y no tendrá el efecto de separarlo como miembro de la misma, para lo cual deberá observarse en todo caso lo dispuesto en el inciso (a) de este Artículo. La decisión de la Junta separando de sus funciones a uno de sus oficiales podrá apelarse ante un panel de arbitraje, según lo dispuesto en el Artículo 7.07 de esta Ley.

(c) Miembros de los comités - Los miembros de los comités nombrados por la Junta podrán ser separados de sus cargos por la Junta, previa notificación de los cargos que se le imputan y la celebración de una vista a la que podrán asistir por sí o acompañados por su representante legal. La decisión separándolo del cargo será a los únicos efectos de relevarlo de las funciones como miembro del comité y no tendrá el efecto de separarlo como miembro de la Junta, para lo cual deberá observarse en todo caso lo dispuesto en el inciso (a) de este Artículo.

La decisión de la Junta separando de su cargo a un miembro de un comité podrá apelarse ante un panel de arbitraje, según lo dispuesto en el Artículo 7.07 de esta Ley.

Artículo 5.23 - Limitación de Empleo

Ningún miembro de un cuerpo directivo podrá ser empleado de una cooperativa de ahorro, y crédito hasta haber transcurrido por lo menos dos (2) años de haber cesado en su posición en la junta o comité, sea por vencimiento de su término o por renuncia al puesto que ocupe en un cuerpo directivo.

Artículo 5.24 - Facultad de la Corporación para Destituir

(a) Cuando la Corporación tenga motivos fundados para creer que cualquier miembro de la Junta u oficial de la misma, o cualquier miembro de los demás cuerpos directivos o cualquier funcionario ejecutivo o empleado de una cooperativa ha incurrido en una de las causas de separación establecidas en el Artículo 5.21 de esta Ley, le formulará cargos de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley Núm. 114 de 17 de agosto de: 2001. La orden para mostrar causa podrá disponer para el relevo provisional de funciones

de la persona afectada. El proceso administrativo, que inicie la Corporación al amparo de este Artículo dará estricto cumplimiento a las disposiciones de la ley orgánica de la Corporación.

(b) Toda persona que sea separada permanentemente de un cargo como miembro de la Junta o como oficial de ésta, o como miembro de cualesquiera de los demás cuerpos directivos o como funcionario ejecutivo de una cooperativa, estará impedido de volver a ser electo, designado, nombrado o contratado para ocupar cualesquiera cargos o empleos en cualquier otra cooperativa, salvo que solicite y obtenga la aprobación de la Corporación.

(c) En caso de una cooperativa que sea objeto de sindicatura, liquidación, usión involuntaria, venta de sus activos, orden de cese y desista o cualquier otra intervención gubernamental que exceda un (1) año, toda persona que durante los tres (3) años previos a la intervención haya ocupado durante al menos seis (6) meses el cargo de director, miembro del comité de supervisión o funcionario ejecutivo estará impedida de ser electa, designada, nombrada o contratada para ocupar cualesquiera cargos o empleos en cualquier otra cooperativa, salvo que solicite y obtenga la aprobación previa de la Corporación. Al momento de la intervención de una cooperativa por la Corporación, ésta concederá a los directores, miembros del comité de supervisión y funcionarios ejecutivos cubiertos por este inciso la oportunidad razonable de demostrar su diligencia en el descargo de sus funciones y obtener con ello la autorización para ocupar cualesquiera cargos o empleos en cualquier otra cooperativa.

CAPÍTULO VI

CAPITAL OPERACIONAL, PRÉSTAMOS Y LIMITACIONES

Artículo 6.01 - Capital de la Cooperativa

El capital de toda cooperativa consistirá de la suma del capital social, capital indivisible, sobrantes y obligaciones de capital.

Artículo 6.02- Capital Indivisible

(a) Las cooperativas mantendrán una reserva irrepartible de capital que se conocerá como capital indivisible. El cincuenta por ciento (50%) de la reserva de capital indivisible se mantendrá en activos líquidos. Al 31 de diciembre del año de aprobación de esta Ley, cada cooperativa deberá contar con un capital indivisible mínimo de tres por ciento (3%) del total de sus activos sujetos a riesgo. A partir de esta fecha, el capital indivisible de cada cooperativa deberá alcanzar, para las fechas enumeradas a continuación, los siguientes niveles respecto de los activos sujetos a riesgo definidos en el inciso (d) de este Artículo:

(A) al 31 de diciembre de 2003, un mínimo de cuatro por ciento (4%) del total de sus activos sujetos a riesgo;

(B) al 31 de diciembre de 2004, un mínimo de cinco por ciento (5%) del total de sus activos sujetos a riesgo;

(C) al 31 de diciembre de 2005, un mínimo de seis por ciento (6%) del total de sus activos sujetos a riesgo;

(D) al 31 de diciembre de 2006, un mínimo de siete por ciento (7%) del total de sus activos sujetos a riesgo;

(E) al 31 de diciembre del 2007, un mínimo de ocho por ciento (8%) del total de sus activos sujetos a riesgo;

(1) A partir del 1 de enero del 2008, cada cooperativa deberá mantener un capital indivisible mínimo de un ocho por ciento (8%) del total de sus activos sujetos a riesgo. En caso de cooperativas de nueva creación, la Corporación definirá mediante reglamentación

u orden administrativa los niveles escalonados de capital indivisible y los plazos razonables correspondientes para alcanzar los mismos. Para fines de esta Ley, los activos sujetos a riesgo de la cooperativa se calcularán según los parámetros de riesgo definidos en el inciso (d) de este Artículo. Una vez la cooperativa cumpla el requisito mínimo dispuesto en este Artículo, tendrá discreción para reducir la aportación que deberá incorporar al capital indivisible.

(2) Toda cooperativa cuya reserva de capital indivisible cumpla con las sumas requeridas en el inciso (a)(1) de este Artículo y no tenga pérdidas acumuladas, se considerará como adecuadamente capitalizada y no se le impondrán penalidades ni se le someterá a memorandos de entendimiento ni a un acuerdo para continuar operaciones por la sola razón de falta de capitalización. La Corporación tendrá facultad para requerir, mediante reglamentación adoptada a tales fines, capital adicional a los porcentajes requeridos en el inciso (a)(1) de este Artículo en función del perfil de riesgo de la cooperativa tomando en consideración los tipos de actividad financiera a que se dedica y los niveles de riesgo que éstos implican.

(3) En el caso de aquellas cooperativas cuya reserva de capital indivisible no cumpla con las sumas requeridas en el inciso (a)(1) de este Artículo se procederá como sigue:

(A) La Corporación, luego de emitir una determinación administrativa formal a los efectos de que la cooperativa no alcanza el capital indivisible mínimo establecido, requerirá de dicha cooperativa un plan de capitalización que demuestre razonablemente los pasos que tomará la institución para subsanar dichas dificultades. El plan de capitalización especificará, como mínimo, lo siguiente:

(i) las medidas específicas que tomará la cooperativa para incrementar sus aportaciones a la reserva de capital indivisible. Dichas medidas incluirán ajustes en la proporción de aportación anual a la reserva de capital indivisible contemplada en el inciso (c) de este Artículo;

(ii) el nivel de capital indivisible que la cooperativa proyecta alcanzar para cada año cubierto por el plan;

(iii) las actividades financieras a que habrá de dedicarse la cooperativa y los volúmenes de negocio que proyecta para cada año cubierto por el plan;

(iv) el nivel de control en el crecimiento de los activos de la cooperativa para cada año cubierto por el plan;

(v) el nivel de economías netas proyectado para cada año cubierto por el plan; y

(vi) el apoyo financiero que habrá de recibir la cooperativa, si alguno, de parte de otras entidades cooperativas de primer, segundo o tercer grado.

(B) El contenido mínimo requerido de un plan de capitalización y los plazos para someter e implementar el mismo serán dispuestos por la Corporación mediante reglamentación. En caso de que el plan de capitalización no sea aprobado o que luego de aprobado sea objeto de incumplimiento sustancial, la Corporación podrá considerar otras acciones reglamentarias. En casos de acciones reglamentarias que afecten la continuidad de operaciones o existencia de la cooperativa, la imposición de dichas restricciones deberán ser ratificadas por el voto de dos terceras partes (2/3) de la Junta de Directores de la Corporación.

(b) Se considerarán como elementos de la reserva de capital indivisible los siguientes:

(1) la reserva de capital indivisible, incluyendo la suma que la cooperativa ha, a acumulado hasta el momento de efectividad de esta Ley, luego de restarle cualquier pérdida acumulada o corriente;

(2) cualesquiera reservas de capital que haya hecho la cooperativa, excepto la reserva de pérdidas o ganancias no realizadas en valores mercadeables disponibles para venta según requerida por el pronunciamiento emitido por el *"Financial Accounting Standards Board"*;

(3) el cinco por ciento (5%) de las ganancias retenidas por la cooperativa no distribuidas;

(4) la porción de reservas establecidas por la cooperativa para absorber posibles pérdidas futuras en préstamos o financiamientos que no estén morosos. Además, la Corporación podrá establecer mediante reglamento aquella porción de la reserva establecida por la cooperativa para absorber posibles pérdidas futuras en préstamos o financiamientos morosos que podrá utilizarse como parte de la reserva de capital indivisible, para lo cual se realizarán los correspondientes estudios tomando en consideración las normas aplicables a otras instituciones financieras;

(5) las obligaciones de capital emitidas por la cooperativa y aquellos otros instrumentos financieros autorizados por la Corporación expresamente para su inclusión como parte del capital indivisible; y

(6) otros elementos que la Corporación establezca mediante reglamento o determinación administrativa.

(c) Toda cooperativa cuya reserva de capital indivisible sea menor del ocho por ciento (8%) separará e incorporará anualmente al capital indivisible un veinticinco por ciento (25%) de sus economías netas o un cuatro por ciento (4%) de su ingreso neto de operaciones, lo que sea mayor, hasta que la reserva haya alcanzado y se mantenga en el ocho por ciento (8%) de los activos sujetos a riesgo. Toda cooperativa cuyo capital indivisible, haya alcanzado y se mantenga en un ocho por ciento (8%) de sus activos sujetos a riesgo, tendrá discreción para reducir hasta no menos de un cinco por ciento (5%) la aportación que ésta habrá de incorporar al capital indivisible.

La Corporación, luego de emitir una determinación administrativa formal a los efectos de que una cooperativa no alcanza el capital indivisible mínimo requerido, requerirá a la cooperativa un plan de capitalización que demuestre razonablemente los pasos que tomará la institución para alcanzar dicho requisito. Respecto a estas cooperativas la Corporación podrá imponer restricciones reglamentarias o administrativas a sus operaciones por falta de capitalización. Dichas restricciones, así como el contenido de un plan de capitalización aceptable y los plazos para someter e implantar el mismo serán definidos por la Corporación mediante reglamentación. En caso de que el plan de capitalización no sea aprobado o que luego de aprobado sea objeto de incumplimiento sustancial, la Corporación podrá considerar otras acciones reglamentarias, incluyendo ordenar la fusión con otra cooperativa. Cualquier fusión involuntaria o transacción de compra de activos y asunción de pasivos ("*purchase and assumption*") se llevará a cabo solamente con otra cooperativa de ahorro y crédito autorizada en esta Ley.

(d) El total de activos sujetos a riesgo de una cooperativa se determinará aplicando los siguientes parámetros o ponderaciones de riesgo:

(1) Los siguientes activos se considerarán como activos sin riesgo y por consiguiente con ponderación de cero por ciento (0%):

(i) efectivo de caja poseído por la cooperativa en sus oficinas o en tránsito;

(ii) préstamos, obligaciones y valores de deuda, incluyendo porciones de todos éstos, que sean emitidos, asegurados o garantizados incondicionalmente por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o sus agencias, o por el Gobierno de Estados Unidos o sus agencias, incluyendo los bancos del sistema de la *Reserva Federal*, *Government National Mortgage Association* (GNMA), *Administración de Veteranos* (VA), *Federal Housing Administration* (FHA), *Farmers Home Administration* (FmHA), *Export-Import Bank* (Exim Bank), *Overseas Private Investment Corporation* (OPIC), *Commodity Credit Corporation* (CCC) y *Small Business Administration*;

(iii) préstamos a estudiantes asegurados bajo el Título IV, Parte B del Higher Education Act de 1965;

(iv) la porción de los préstamos de los socios garantizada por acciones, depósito o ambos que no puedan retirarse de la cooperativa; y

(v) la inversión de la cooperativa en la Corporación.

(2) Los siguientes activos se considerarán activos sujetos a riesgo con ponderación de veinte por ciento (20%):

(i) efectos en proceso de cobro. La Corporación determinará por reglamento cuáles efectos podrán incluirse bajo este inciso;

(ii) la porción de los préstamos a no socios garantizada por bienes líquidos que se mantienen en garantía del préstamo según lo dispuesto en el Artículo 2.03(a)(2);

(iii) préstamos, obligaciones y valores de deuda, incluyendo porciones de todos éstos, que sean emitidos, asegurados o garantizados incondicionalmente por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o sus agencias, o por el Gobierno de Estados Unidos cuyas obligaciones no están respaldadas explícitamente por la entera fe y crédito del Gobierno de Estados Unidos, incluyendo *Federal Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC)*, *Federal National Mortgage Association (FNMA)*, *Farm Credit System*, *Federal Home Loan Bank System*, y *Student Loan Marketing Association (SLMA)*.

(iv) depósitos, préstamos, obligaciones y valores de deuda, incluyendo porciones de éstos, que sean emitidos, asegurados o garantizados por instituciones depositarias de Estados Unidos y Puerto Rico, incluyendo el Banco Cooperativo de Puerto Rico. Se excluyen acciones de entidades con fines de lucro;

(v) el valor en los libros de la propiedad inmueble o el valor de tasación según certificado por un tasador debidamente cualificado, lo que sea menor, que se esté utilizando o se proyecte utilizar como oficinas, sucursales, centro de servicios, áreas de estacionamiento u otras facilidades, neto de cualquier deuda que esté directamente garantizada mediante gravamen hipotecario constituido y perfeccionado sobre dicho inmueble; y

(vi) los seguros prepagados que correspondan a riesgos de la institución.

(3) Los siguientes activos se considerarán activos sujetos a riesgo moderado con ponderación de cincuenta por ciento (50%):

(i) Aquellos préstamos completamente garantizados por primeras hipotecas sobre propiedades residenciales de una a cuatro familias. Estos préstamos deberán cualificar para ser vendidos en el mercado secundario hipotecario, no mostrar morosidad en exceso de noventa (90) días y tener una razón de préstamo total a valor de garantía (*'Loan to Value'*) máxima de un ochenta por ciento (80%); Disponiéndose que, la Corporación podrá, mediante reglamentación o determinación administrativa, autorizar razones de préstamo total a valor de la garantía (*"Loan to Value"*) mayores que sean cónsonas con los parámetros del mercado secundario.

(ii) Aquella inversión que represente una participación en préstamos de los descritos en el subinciso anterior.

(4) Se considerarán activos con ponderación de cien por ciento (100%) todos los demás activos no reconocidos en ninguna de las categorías anteriores.

(5) La Corporación queda facultada para, mediante reglamentación o determinación administrativa, añadir a las categorías dispuestas aquellos otros activos que ameriten una ponderación de riesgo menor del cien por ciento (100%).

(e) Por decisión de su Junta de Directores cualquier cooperativa podrá acelerar la acumulación del capital indivisible, aportando al mismo una cuantía en exceso de lo requerido por este Artículo.

Artículo 6.03 - Concesión de Préstamos

(a) Políticas prestatarias. - Las cooperativas concederán préstamos según las normas prestatarias que establezca su Junta, las cuales no podrán ser incompatibles con las prácticas utilizadas en la administración de instituciones financieras, que se reconocen como prácticas sanas y en protección del interés público. Dichas políticas prestatarias incluirán:

- (1) procesos adecuados y objetivos de evaluación y medición del riesgo crediticio, atendiendo la naturaleza especial de los diferentes tipos de financiamientos;
- (2) las prácticas sanas de evaluación y concesión de crédito generalmente aceptadas en la industria financiera, pudiendo proveerse normas especiales pero prudentes que viabilicen el acceso al crédito por personas de escasos recursos;
- (3) políticas de precio o tasas de interés que reconozcan diferentes niveles de riesgo crediticio;
- (4) normas sobre la aceptación de colaterales y la documentación y procedimientos para la debida constitución y perfeccionamiento de los gravámenes aplicables; y
- (5) políticas y procedimientos de evaluaciones crediticias específicamente adoptadas para financiamientos comerciales y la designación de oficiales de crédito comercial debidamente capacitados para dicha función.

Independientemente de las garantías y colaterales que se ofrezcan, ninguna cooperativa concederá un préstamo a persona alguna, a menos que conste y documente, la existencia de fuentes confiables para el repago del mismo en la forma pactada, pudiendo dichas fuentes ser haberes suficientes en depósito mantenidos en la cooperativa y retenidos por ésta, incluyendo en el caso de no socios, bienes líquidos según dispuesto en el Artículo 2.03 de esta Ley.

Las políticas prestatarias deberán ser revisadas periódicamente para asegurar su adecuación ante cambios en el mercado, tendencias en la morosidad de la cartera, la calidad de los activos de la institución y la necesidad de mantener una posición competitiva.

(b) Documentación de préstamos. - Toda solicitud de préstamo expresará información necesaria y pertinente para la evaluación de la misma. Asimismo, incluirán, sin que se entienda como una limitación, datos suficientes que faciliten la gestión de verificar la identidad, localización, dirección física, historial de crédito, lugar de operaciones, la fuentes de ingreso y el empleo o trabajo, del solicitante y de los garantizadores o codeudores, así como las garantías que se ofrezcan.

Los préstamos que conceden las cooperativas quedarán evidenciados por un pagaré legítimo y por todos aquellos otros documentos que la cooperativa requiera, los cuales cumplirán con los requisitos y formalidades que exija la Corporación mediantereglamentación. Los firmantes de los pagarés, sean o no socios de la cooperativa, se considerarán a todos los efectos legales como deudores principales y solidarios, pudiéndola cooperativa proceder en sus gestiones de cobro, inclusive por la vía legal, en contra de cualesquiera de ellos a su discreción. Cualquier cantidad de dinero que adeude un socio o no socio a una cooperativa por cualquier concepto, incluyendo el pago de cargos por servicio, sobregiros o cualquier otro concepto, se considerará una deuda reconocida y será recobrable por la cooperativa en cualquier tribunal con jurisdicción competente y susceptible del gravamen estatutario dispuesto en el inciso (c) de este Artículo.

(c) Gravamen estatutario y naturaleza no embargable de haberes. – Las acciones de capital, depósitos y otros haberes que posea todo deudor o garantizador en la cooperativa quedarán gravados por operación de ley y sin necesidad de ninguna otra formalidad, documento, trámite ni registro hasta el límite de todas las deudas contraídas o garantizadas con dicha cooperativa, mientras estas deudas subsistan en todo o en parte. Se dispone expresamente que con relación a deudas contraídas con la cooperativa, el gravamen sobre todas las acciones de capital, depósitos y demás haberes que posean los deudores en la cooperativa está exceptuado de los requisitos para la constitución de gravámenes mobiliarios exceptuado de cualesquiera requisitos de ejecución de dichos gravámenes dispuestos en cualquier otra ley, incluyendo la Ley Núm. 208 del 17 de agosto de 1995, también conocida como “Ley de Transacciones Comerciales”, y el Código

Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado. Se reconoce, además, la facultad expresa de la cooperativa de, a su entera y exclusiva discreción y selección, imputar las acciones, depósitos y demás haberes de los deudores o garantizadores contra cualesquiera deudas, compromisos y obligaciones que éstos mantengan con la cooperativa.

Se dispone, además, que dichas acciones de capital, depósitos y otros haberes no estarán sujetos a embargo para satisfacer una deuda distinta a la contraída con la cooperativa hasta el monto de la obligación contraída con la cooperativa al momento de la sentencia.

(d) Concesión de crédito a miembros de los cuerpos directivos y funcionarios ejecutivos. - Sujeto a la reglamentación de la Corporación, la Junta de cada cooperativa establecerá la política institucional que regirá, respecto de la forma, el término y las condiciones, para la concesión de préstamos a los miembros de los cuerpos directivos y a los funcionarios ejecutivos y empleados de la misma.

Igualmente, establecerá los procedimientos para el control y fiscalización de los préstamos que se concedan a éstos.

Tanto dicha política institucional como los procedimientos para su implantación deberán establecer controles adecuados para que los miembros de los cuerpos directivos, funcionarios y empleados no participen del proceso de aprobación, control y, fiscalización de sus propios préstamos, ni reciban privilegios en virtud de la posición que ocupen en la cooperativa y fijará las sanciones a imponerse por cualquier violación a dicha política institucional. La política institucional podrá autorizar descuentos o concesiones razonables para los empleados de la cooperativa, siempre y cuando los mismos sean consustanciales con programas similares en otras instituciones financieras.

(e) La Corporación tendrá facultad para definir mediante reglamentación cuantías máximas de préstamos que podrán concederse a un solo prestatario. Dichas limitaciones habrán de ser comparables a las aplicables a instituciones depositarias que operan en Puerto Rico.

Artículo 6.04 - Participación en los Sobrantes

La Junta de Directores, dispondrá para la distribución de los sobrantes netos que haya acumulado la cooperativa al final de cada año, después de la amortización de pérdidas acumuladas, si alguna, seguido de las aportaciones a la reserva indivisible según requerido en esta Ley y a la provisión para posibles pérdidas en préstamos, las reservas mandatorias y voluntarias, según lo dispuesto en el Artículo 6.07 de esta Ley.

No procederá la distribución de sobrantes mientras la cooperativa tenga pérdidas acumuladas. En aquellos casos en que la cooperativa demuestre haber atendido satisfactoriamente las causas que provocaron las pérdidas acumuladas y que muestre una mejoría sostenida en su condición financiera, gerencial u operacional, la Corporación podrá autorizar el diferimiento de la pérdida acumulada y permitir la distribución de una porción de los sobrantes.

Los sobrantes podrán ser distribuidos a base del reembolso o devolución computado tomando en consideración el patrocinio de intereses cobrados, o una combinación de dicho reembolso por patrocinio unido al pago de dividendos sobre acciones pagadas y no retiradas al finalizar el año natural, en las proporciones y cantidades que disponga la Junta de Directores. Toda distribución de sobrantes se efectuará mediante acreditación de acciones, nunca en efectivo.

Las acciones que al cierre del año de operaciones de la cooperativa hayan sido pagadas en su totalidad percibirán en pago de dividendos una parte proporcional del sobrante, el cual se calculará desde el día primero del mes siguiente a la fecha en que se efectúe el

pago. El reembolso o devolución a base de patrocinio de intereses cobrados se hará en proporción a los intereses que éstos paguen sobre préstamos durante el año.

Artículo 6.05 - Retiro de Depósitos y Acciones

Cuando un socio de una cooperativa se retire voluntariamente o sea expulsado de la misma, se le pagará, después de descontarse cualquier deuda que tenga con la cooperativa (incluyendo deudas contraídas como deudor solidario, fiador o garantizador, independientemente de que haya obtenido o no beneficio personal del referido empréstito), la cantidad de dinero que dicho socio haya pagado por acciones y depósitos, más las cantidades de dividendos, patrocinio e intereses debidamente devengados y acreditados hasta la fecha de su retiro o expulsión. Dicho pago se efectuará dentro de los treinta (30) días siguientes al retiro o separación del socio.

La cooperativa podrá requerir que la notificación de retiro de depósitos se haga con treinta (30) días de anticipación y que la notificación de retiro de acciones se efectúe con noventa (90) días de anticipación.

Artículo 6.06 - Retiro o Transferencia de Acciones por Miembros de la- Junta y de los Comités

Los miembros de la Junta y los oficiales de ésta, los miembros de los comités, los funcionarios ejecutivos y los socios de una cooperativa que participen directamente en la administración de: la misma, no podrán retirar ni transferir sus acciones mientras desempeñen sus cargos o funciones en la cooperativa. Se considerará nulo todo retiro o traspaso de acciones que hagan esas personas en los seis (6) meses anteriores a la fecha que la Corporación determine que la solvencia o liquidez de la cooperativa está en peligro o a la fecha en que la Corporación decida utilizar cualquier mecanismo autorizado por ley para salvaguardar los intereses de la misma, lo que ocurra primero.

En tal caso, dichas personas continuarán respondiendo a los acreedores de la cooperativa o a la Corporación o a cualquier otro asegurador por el valor de las acciones que hayan retirado y transferido.

No obstante, en casos de emergencias o extrema necesidad, los miembros de la Junta y los oficiales de ésta, los miembros de los comités, los funcionarios ejecutivos y los socios de una cooperativa que participen directamente en la administración de la misma podrán retirar o transferir sus acciones, previa autorización de la Junta de Directores. En tal caso, los miembros de la Junta y los oficiales de ésta, los miembros de los comités, los funcionarios ejecutivos y los socios de una cooperativa que participen directamente en la administración de la misma, continuarán respondiendo a los acreedores de la cooperativa, a la Corporación o a cualquier otro asegurador, de conformidad con lo previamente establecido.

Artículo 6.07 - Provisión para Posibles Pérdidas en Préstamos, Requisito de Liquidez, Reservas para Contingencias y Reservas Voluntarias

(a) Provisión para posibles pérdidas en préstamos. - Toda cooperativa establecerá una provisión para posibles pérdidas en préstamos, con cargo al ingreso de operaciones, utilizando una fórmula basada en la experiencia real de pérdidas para préstamos según sea fijada mediante reglamentación por la Corporación.

(b) Requisito mínimo de liquidez. - Toda cooperativa mantendrá siempre una cantidad mínima requerida de activos en estado líquido que se computará en proporción a la composición y vencimiento de sus depósitos y certificados. La Corporación adoptará reglamentos para determinar el por ciento requerido, y la base para el cómputo del mismo, la cual no será menor del quince por ciento (15%) de la suma total de obligaciones en depósitos y certificados, según éstos aparezcan el último día del mes. Este

requerimiento mínimo de liquidez no implica una reserva adicional contra las economías de la cooperativa.

(c) Reserva para Contingencias. - La Corporación podrá exigir a cualquier cooperativa que establezca y mantenga, con cargo a su economía neta, una reserva de contingencia para protegerla contra cualquier riesgo o actividad de naturaleza extraordinaria razonablemente determinable cuyas consecuencias económicas adversas puedan acarrear pérdidas mayores que el capital indivisible acumulado o disponible.

Asimismo, podrá autorizar el establecimiento de esta reserva solicitud de la Junta de una cooperativa.

(d) Reservas voluntarias. - La Junta de toda cooperativa podrá disponer las aportaciones periódicas a las reservas voluntarias cuya creación haya sido previamente aprobada por la asamblea general de socios o de delegados. Las reservas voluntarias podrán establecerse para cualesquiera fines legítimos que adelanten los intereses de la cooperativa o del Movimiento Cooperativo, incluyendo contingencias, inversión en subsidiarias cien por ciento (100%) poseídas, inversión en empresas financieras de segundo grado y/o en empresas cooperativas, desarrollo y crecimiento institucional o para la educación en asuntos cooperativos y capacitación técnica y profesional.

Artículo 6.08 - Exención Contributiva

(a) Las cooperativas, sus subsidiarias o afiliadas, así como los ingresos de todas sus actividades u operaciones, todos sus activos, sus capitales, sus reservas y sobrantes y los de sus subsidiarias o afiliadas estarán exentos de toda clase de tributación sobre ingresos, propiedad, arbitrio, patente o cualquiera otra contribución impuesta o que más adelante se impusiere por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o cualquier subdivisión política de éste.

(b) Todas las acciones y valores emitidos por las cooperativas y por cualesquiera de sus subsidiarias o afiliadas estarán exentos, tanto en su valor total como en los dividendos o intereses pagados al amparo de los mismos, de toda clase de tributación sobre ingresos, propiedad, arbitrio, patente o cualquiera otra contribución impuesta o que más adelante se impusiere por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o cualquier subdivisión política de éste.

(e) Las cooperativas y sus subsidiarias o afiliadas estarán exentas del pago de derechos, arbitrios o aranceles estatales o municipales, incluyendo el pago de cargos por licencias, patentes, permisos y registros, del pago de cargos, derechos, sellos o comprobantes de rentas internas relativos al otorgamiento de toda clase de documentos públicos y privados, del pago de cargos, derechos, sellos o comprobantes de rentas internas relativos a la inscripción de los mismos en el Registro de la Propiedad o cualquier otro registro público u oficina gubernamental y del pago de cargos, derechos, sellos o comprobantes de rentas internas relativos a la expedición de certificaciones por dichos registros o por cualquier otra oficina gubernamental. Las cooperativas y sus subsidiarias o afiliadas estarán exentas, además, del pago de cargos, derechos, sellos o comprobantes de rentas internas, arbitrios o aranceles requeridos en el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico o por cualquier agencia, instrumentalidad, corporación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o cualquier subdivisión política de éste.

(d) Las exenciones que se conceden bajo este Artículo a las subsidiarias o afiliadas de las cooperativas aplicarán mientras dichas subsidiarias o afiliadas estén sujetas al control de una o más cooperativas.

Artículo 6.09 - Cuentas No Reclamadas

Las cantidades de dinero y otros bienes líquidos en poder de una cooperativa que no hayan sido reclamados o que no hayan sido objeto de transacción alguna durante los

cinco (5) años previos, pasarán a una reserva de capital social de la cooperativa o a su partida de capital indivisible, a opción de la cooperativa. A los fines de este Artículo, la imposición de cargos por servicio ni el pago de intereses o dividendos se considerarán como una transacción o actividad en la cuenta. Noventa (90) días previo a efectuar la transferencia de estos bienes líquidos a las reservas antes descritas, la cooperativa publicará un aviso en sus sucursales y oficinas de servicio con la lista de las cuentas que serán objeto de la transferencia. Durante dicho período de noventa (90) días, el listado estará disponible para la revisión de todo socio y del público en general. Toda persona que, durante el período de noventa (90) días antes mencionado, presente evidencia fehaciente de titularidad de una o más cuentas identificadas en la lista tendrá derecho a que las mismas sean retiradas de la misma y no sean objeto de transferencia a las reservas de capital. Luego de efectuada la transferencia de una cuenta u otros bienes líquidos a las reservas de capital, sólo se admitirán reclamaciones presentadas no más tarde de dos, (2) años luego de la transferencia. En dichos casos la cooperativa podrá imponer cargos administrativos correspondientes a los trámites de investigación y análisis de la reclamación.

De conformidad con estas disposiciones, las cooperativas, sus cuentas de acciones y depósitos y sus reservas estarán exentas de las disposiciones de la Ley Núm. 36 de 28 de julio de 1989, según enmendada, conocida como "Ley de Dinero y Otros Bienes Líquidos Abandonados o No Reclamados".

Artículo 6. 10 - Aportación para Educación

Toda cooperativa estará obligada a separar anualmente no menos de un décimo de uno por ciento (0.1%) del volumen total de negocios, para fines educativos e integración del cooperativismo en Puerto Rico. Dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre de sus operaciones de cada año económico, dichas cooperativas determinarán la cantidad que resulte del referido cómputo, hasta un máximo de cuatro mil (4,000) dólares. Toda cooperativa cuyo volumen total de negocios exceda de cuatro millones (4,000,000) de dólares anuales vendrá obligada a aportar una cantidad adicional de cinco por ciento (5%) de su sobrante neto anual hasta un máximo de seis mil (6,000) dólares adicionales.

Este fondo se aportará a la Liga de Cooperativas y será utilizado por ésta para fines de educación e integración y asesoramiento. Para fines de este Artículo, el volumen total de negocios se computará sumando el total de préstamos concedidos por la cooperativa al cierre de sus operaciones más el total de ingresos por intereses en ahorros e inversiones a dicha fecha.

Dentro del mes siguiente al cierre de operaciones de cada año económico de la cooperativa, ésta deberá haber depositado en la Liga de Cooperativas el total de las sumas que le haya correspondido pagar para ese año terminado. Los depósitos se harán trimestralmente, estimándose cada pago parcial en una cuarta parte de lo que le correspondió pagar el año precedente. Al cierre del año se harán los ajustes pertinentes y en caso de algún pago en exceso, se acreditará el pago estimado del primer trimestre siguiente.

CAPÍTULO VII CAMBIOS INSTITUCIONALES

Artículo 7.01 - Limitación a Fusionarse o Consolidarse

Ninguna cooperativa podrá fusionarse o consolidarse con otra cooperativa, excepto en la forma que se dispone en los Artículos 7.02 y 8.07 de esta Ley. Las cooperativas no podrán vender sus activos, ni adquirir obligaciones o deudas asegurables por la

Corporación, excepto en el curso normal de sus negocios, previa autorización de la Corporación y de acuerdo con lo establecido mediante reglamento.

Artículo 7.02 -Fusión o Consolidación Voluntaria

Dos o más cooperativas organizadas de conformidad con esta Ley, podrán fusionarse o consolidarse voluntariamente, mediante la aprobación por la asamblea de socios o de delegados, según aplique, previo a la autorización de la Corporación, y conforme al procedimiento establecido mediante reglamento o determinación administrativa. Al fusionarse una o más cooperativas, una de ellas concederá el nombre, activos y demás bienes y derechos a la otra cooperativa, que será la que permanecerá existiendo como entidad jurídica reconocida. Al consolidarse dos o más cooperativas formarán una nueva entidad cooperativa diferente a las antes existentes.

No se efectuará ninguna transacción de fusión o consolidación voluntaria, venta de activos y/o pasivos, ni ninguna otra transacción o acuerdo similar con instituciones que no sean cooperativas.

Artículo 7.03 - Disolución Voluntaria de Cooperativas

Cualquier, cooperativa cuya disolución no requiera desembolsos por parte de la Corporación por concepto del seguro de acciones y depósitos, podrá disolverse voluntariamente mediante la aprobación de la asamblea general de socios o la asamblea general de delegados, según corresponda, siguiendo el procedimiento que a los efectos establezca la Corporación. Cuando la disolución requiera desembolsos por parte de la Corporación, se observará el procedimiento que se establece en el Artículo 8. 11 de esta Ley.

CAPÍTULO VIII

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, FISCALIZACIÓN

Artículo 8.01-Año Fiscal de Cooperativas

El año fiscal de toda cooperativa será establecido en las cláusulas de incorporación y en el reglamento general de la misma.

Artículo 8.02 - Notificaciones y convocatorias

En todo caso en que la cooperativa notifique o convoque a sus socios, dicha notificación o convocatoria podrá efectuarse mediante:

- (a) envío por correo a la dirección que obre en los registros de la cooperativa; o
- (b) publicación en un periódico de circulación general unido a la colocación de carteles visibles en las sucursales y oficinas de servicio de la cooperativa.

Además, la cooperativa podrá utilizar métodos electrónicos o de radiodifusión, como mecanismos suplementarios adicionales a los antes descritos.

Artículo 8.03 - Informes

Las cooperativas someterán todos aquellos informes que les requiera la Corporación con la frecuencia, el detalle y en la forma que mediante orden o reglamentación lo requiera ésta. El Presidente y el Secretario de la Junta certificarán que los estados financieros anuales de la cooperativa son correctos, de acuerdo con su mejor conocimiento y creencia y que fueron examinados y discutidos por la Junta. Los estados se radicarán ante la Corporación no más tarde de los ciento veinte (120) días siguientes a la fecha de terminación del año fiscal de la cooperativa.

Toda cooperativa llevará una contabilidad detallada de sus operaciones y actividades a base de los principios generalmente aceptados de contabilidad pública, excepto en los

casos en que esta Ley disponga que se haga de otra forma. Además, la Corporación podrá requerir que las cooperativas sometan informes sobre los controles internos certificados por contadores públicos autorizados.

Artículo 8.04 - Procedimientos Adjudicativos

Cuando por disposición de esta Ley o de los reglamentos, la Corporación deba adjudicar una querella presentada por cualquier cooperativa, sus cuerpos directivos, comités y funcionarios ejecutivos o por cualquier socio o depositante de una cooperativa por violaciones a esta Ley, la Ley Núm. 114 de 17 de agosto de 2001 o a los reglamentos adoptados al amparo de éstas, o por violaciones al reglamento general de la cooperativa, la Corporación, a iniciativa propia o a petición de cualesquiera de las partes, someterá el asunto a la consideración de un panel de arbitraje compuesto por tres (3) árbitros, uno (1) seleccionado por cada parte en controversia y el tercero seleccionado de común acuerdo por los dos (2) primeros árbitros. En caso de existir más de dos (2) partes en controversia, se podrán designar árbitros adicionales. En caso de resultar un panel compuesto por un número par de árbitros, éstos designarán de común acuerdo el árbitro adicional para asegurar un número impar. La Corporación adoptará reglas que regirán los procesos de arbitraje, incluyendo entre otras cosas, los requisitos de elegibilidad de los árbitros, las normas procesales a aplicarse, los cargos y derechos correspondientes para sufragar los gastos del proceso de arbitraje y la asunción de costas y gastos por las partes. Los papeles de arbitraje aplicarán las normas vigentes y no podrán generar interpretaciones u opiniones que impliquen adopción de política pública. A fin de asegurar una aplicación correcta de las normas jurídicas y reglamentarias, la Corporación proveerá asistencia técnica a los paneles de arbitraje.

La parte afectada por la decisión del panel de arbitraje podrá solicitar la revisión judicial de dicha decisión ante el Tribunal de Primera Instancia en que ubique la oficina principal de la cooperativa, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de notificación de la decisión del panel.

En aquellos casos en que la Corporación determine que el interés público requiere de una adjudicación directa, se observarán los procedimientos reglamentarios establecidos por la Corporación de conformidad con la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

Artículo 8.05- Inspecciones, Auditores y Exámenes

Toda cooperativa cubierta por esta Ley, deberá someter anualmente a la Corporación, a la Administración de Fomento Cooperativo y a la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, estados financieros auditados dentro de los ciento veinte (120) días siguientes al cierre de operaciones de su año fiscal. Los estados financieros auditados de las cooperativas remitidos a las entidades antes mencionadas estarán disponibles al público en general y podrán copiarse mediante el pago de derechos. Además, la cooperativa remitirá a la Corporación, en igual plazo, copia de la carta a la gerencia emitida por los auditores externos.

Artículo 8.06 - Política Pública de Fortalecimiento y Rehabilitación de Cooperativas

Es política pública del Estado Libre Asociado fortalecer y propiciar el desarrollo de toda cooperativa. De conformidad con la misma, la Corporación procurará identificar de forma oportuna aquellas condiciones de debilidad operacional, financiera o gerencial que requieran acciones correctivas. Una vez identificadas, la Corporación procurará que la cooperativa implante de forma ordenada y diligente las medidas correctivas necesarias que propicien su fortalecimiento y desarrollo, para lo cual podrá utilizar las medidas

administrativas 37 reglamentarias dispuestas en la Ley Núm. 114 de 17 de agosto de 2001, esta Ley y las leyes especiales aplicables.

Será responsabilidad primaria de los cuerpos directivos o gerenciales de la cooperativa la implementación de las medidas correctivas dispuestas por la Corporación, sin menoscabo de las facultades de la Corporación para la formulación de cargos y la destitución de oficiales, directores y empleados al amparo del Artículo 19 de la Ley Núm. 114 de 17 de agosto de 2001 y del Artículo 5.24 de esta Ley. En los casos en que así lo requiera la protección de los socios y los depositantes, la continuidad o la integridad de las operaciones de la cooperativa o la protección del fondo de seguro de la Corporación, ésta podrá adoptar las medidas reglamentarias necesarias previstas en la Ley Núm. 114 de 17 de agosto de 2001, esta Ley y en las leyes especiales aplicables, conducentes a la rehabilitación y fortalecimiento de la cooperativa.

Antes de proceder a decretar una fusión, consolidación, venta de activos y asunción de pasivos o la disolución y liquidación de una cooperativa, se requerirá que la Corporación, mediante el voto afirmativo de dos terceras (2/3) partes de su Junta de Directores, haga una determinación expresa de que no existen posibilidades de rehabilitación de la cooperativa.

Artículo 8.07- Fusión o Consolidación Mandatoria

La Corporación podrá ordenar la fusión o consolidación mandatoria de una cooperativa cuando la Corporación, mediante el voto afirmativo de dos terceras (2/3) partes de su Junta de Directores, haga una determinación expresa de que no existen posibilidades de rehabilitar la cooperativa y se apruebe la fusión o consolidación, el seguro de acciones o de depósitos. En ningún momento la cooperativa que se propone sea recipiente estará obligada a aceptar la fusión.

No se efectuará ninguna transacción de fusión, consolidación, venta de activos o pasivos ni ninguna otra transacción o acuerdo similar con instituciones que no sean cooperativas.

Artículo 8.08 - Administración Bajo Sindicatura

(a) (1) La Corporación podrá ordenar que una cooperativa sea puesta bajo administración de emergencia o bajo administración en sindicatura cuando, después de una auditoria, investigación, examen o inspección se demuestre que la cooperativa exhibe las situaciones dispuestas en la Ley Núm. 114 de 17 de agosto de 2001.

(2) La Corporación deberá celebrar una vista antes de emitir una orden para poner a una cooperativa bajo administración en sindicatura. No obstante, la Corporación podrá emitir una orden provisional decretando la sindicatura sin necesidad de celebrar vista, cuando a su juicio la situación de la cooperativa sea de tal naturaleza que esté causando o pueda causar daño irreparable a los intereses de la misma, a los de sus socios o de las personas con intereses o depósitos en la misma. Cuando la Corporación emita una orden provisional de sindicatura, deberá celebrar una vista administrativa dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación de la misma, para determinar si se hace permanente o se revoca.

(3) Cuando la Corporación ordene la administración de emergencia o administración en sindicatura de una cooperativa asegurada, la Corporación actuará como administrador interino o síndico, asumiendo los poderes y funciones de la gerencia o de los cuerpos directivos y operando la institución de conformidad con los reglamentos que al efecto se adopten. La Corporación desempeñará sus funciones como síndico administrador a través de sus funcionarios o a través de un tercero contratado. En todo caso, el funcionario o agente representante de la corporación será una persona de integridad y reputación moral intachable con los conocimientos gerenciales, financieros, contables y comerciales que le

capaciten para efectuar un proceso de administración interino o de rehabilitación en el plazo más corto posible.

(4) La administración de emergencia no excederá de sesenta (60) días, cuyo plazo podrá prorrogarse por la Junta de Directores de la Corporación. En caso que la administración de emergencia excediese ciento ochenta (180) días, la intervención en la cooperativa por la Corporación se considerará como una administración en sindicatura, sujeta a lo dispuesto en el inciso (b) de este Artículo.

(b) (1) Toda sindicatura tendrá como propósito y objetivo la protección y estabilidad inmediata de la cooperativa y la pronta instalación de nuevos cuerpos directivos y gerenciales. Durante la sindicatura, la Corporación tomará las medidas inmediatas requeridas para salvaguardar la integridad y estabilidad de la institución. El funcionario, o agente representante de la Corporación, a quién se designe como agente del síndico, someterá a la Junta de Directores de la Corporación un plan de trabajo que contemplará como mínimo lo siguiente:

(i) medidas extraordinarias tomadas por el agente del síndico;

(ii) medidas pendientes de implementación;

(iii) proceso de designación de nuevos cuerpos directivos y gerenciales;

(iv) plan de rehabilitación financiera;

(v) propuesta de acuerdo de operaciones o memorando de entendimiento; y

(vi) apoyo financiero o técnico que habrá de recibir la cooperativa por otras entidades cooperativas de primer, segundo o tercer grado.

(2) El plan de trabajo del agente del síndico se presentará a la Junta de la Corporación en un plazo que no exceda de ciento veinte (120) días, luego de decretada la sindicatura. De mediar circunstancias extraordinarias, este plazo podrá prorrogarse por la Junta de la Corporación por un período adicional de sesenta (60) días. El plan de trabajo, no contemplará contrataciones o la imposición o asunción de obligaciones o gastos extraordinarios que no correspondan al curso ordinario de los negocios de la cooperativa, salvo que sean aprobados por dos terceras (2/3) partes de la Junta de Directores de la Corporación o que estén sujetos a ratificación de una mayoría de la nueva junta de directores de la cooperativa a ser designada, según se dispone más adelante.

Una vez aprobado por la Junta de la Corporación, el agente del síndico procederá con su implementación.

(3) La designación de nuevos cuerpos directivos deberá efectuarse no más tarde de ciento ochenta (180) días luego de aprobado el plan de trabajo. La designación de nuevos cuerpos directivos se efectuará mediante la celebración de una asamblea extraordinaria de socios o de delegados, según corresponda, convocada y dirigida por la Corporación. La elección de los nuevos integrantes de los cuerpos directivos proveerá para el escalonamiento de términos de conformidad con lo requerido en esta Ley. Los nuevos cuerpos directivos asumirán sus funciones treinta (30) días luego de su selección. Durante dicho período, los nuevos cuerpos directivos recibirán de la Corporación toda la información relativa al plan de rehabilitación financiera y al acuerdo de operaciones o memorando de entendimiento que regirá el funcionamiento de la cooperativa. A partir de dicha fecha, se entenderá concluida la sindicatura.

Artículo 8.09 - Suspensión o Revocación de Permisos y Cancelación de Certificado.

La Corporación podrá suspender temporalmente o revocar permanentemente el permiso para operar de cualquier cooperativa y requerir al Secretario de Estado que cancele su certificado de registro cuando:

(a) se reduzca el número total de los socios de una cooperativa a menos del doble de los integrantes de los cuerpos de elección;

- (b) se obtenga el permiso para funcionar como una entidad cooperativa mediante fraude o error;
- (c) la cooperativa deje de funcionar y operar;
- (d) se pruebe, a satisfacción de la Corporación, que la cooperativa está funcionando con un propósito ilegal o en violación a las disposiciones de esta Ley o de los reglamentos adoptados al amparo de la misma, después de haber sido debidamente notificada sobre ello por la Corporación;
- (e) la cooperativa lo solicite expresamente a la Corporación y ésta lo entienda conveniente después de obtener la evidencia necesaria en la forma que determine;
- (f) rehúse radicar los estados certificados sobre total de acciones y depósitos requeridos por la Corporación;
- (g) se niegue a pagar las primas del seguro, las acciones de capital o las primas especiales que le requiere la Corporación mediante sus leyes y reglamentos; o
- (h) se niegue a corregir cualquier error u omisión de los estados certificados requeridos por la Corporación o se niegue a pagar las sumas que adeuden por concepto de primas; anuales, especiales, recargos e intereses, o se niegue a depositar en la Corporación la aportación de capital requerida por ley o a pagar cualquier multa administrativa que se le haya impuesto.

Antes de emitirse una orden conforme con lo dispuesto en este Artículo, la Corporación tomará las medidas adecuadas para proteger los intereses de los socios de la cooperativa y del fondo de seguro de la Corporación. Cuando la Corporación compruebe que existe cualesquiera de las causas antes establecidas, lo notificará a la Junta de la cooperativa de que se trate, advirtiéndole de su intención de suspender temporalmente o de revocar permanentemente el permiso para operar de la cooperativa. En dicha notificación expresará los fundamentos en que basa su determinación.

En los casos bajo los incisos (a), (b), (c) o (d) de este Artículo, la Corporación fijará un plazo no menor de veinte (20) días para que la Junta de la cooperativa evalúe los cargos y le someta un escrito exponiendo los fundamentos por los cuales no se deba suspender o revocar el permiso para funcionar como entidad cooperativa. La Corporación considerará los fundamentos presentados dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su recibo y, cuando entienda que los cargos son subsanables, podrá conceder un término a la cooperativa para que los subsane, estableciendo la forma en que ésta deberá conducir sus operaciones durante dicho término. Cuando, a juicio de la Corporación, los fundamentos expuestos por la Junta no sean suficientes, la Corporación revocará permanentemente el permiso para operar de la cooperativa y solicitará al Secretario de Estado que cancele su certificado de registro.

Cuando se cancele permanentemente el certificado de registro de una cooperativa, la Corporación notificará a todos los socios mediante la publicación de dos (2) avisos en por lo menos dos (2) diarios, dentro de las dos (2) semanas siguientes a la fecha de la cancelación de registro o por escrito a la última dirección conocida. Las cooperativas a las que se les cancele permanentemente el certificado de registro dejarán de participar de todos los privilegios que ostenten como entidad cooperativa a partir de la fecha de publicación de los avisos requeridos en este Artículo. Esta disposición no afectará la existencia de los activos y pasivos de la cooperativa, los cuales se mantendrán en toda su fuerza y vigor como si ésta continuara disfrutando de su autorización para operar como una entidad cooperativa hasta tanto sean debidamente liquidados por la Corporación. Tampoco privará a los socios de la cooperativa de las garantías del seguro de acciones y depósitos de la Corporación.

Artículo 8. 10 - Causas para la Disolución de Cooperativas

La Corporación podrá ordenar la disolución de una cooperativa cuando:

- (a) se encuentre en peligro de insolvencia económica;
- (b) se compruebe que el valor real de las acciones se ha reducido en más de un cinco por ciento (5%) de su valor en los libros, luego del estudio económico al efecto;
- (c) deje de cumplir con los requisitos necesarios para acogerse al seguro de, acciones y depósitos de la Corporación; y
- (d) deje de pagar a la Corporación las primas regulares o especiales o de depositar en la misma la aportación de capital requerida por ley.

Antes de proceder a decretar la disolución de una cooperativa, se requerirá que la Corporación, mediante el voto afirmativo de dos terceras (2/3) partes de su Junta de Directores, hará una determinación expresa de que no existen posibilidades para la rehabilitación de la cooperativa.

Artículo 8.11 - Procedimiento para la Disolución Ordenada por la Corporación

En todo trámite de disolución de una cooperativa se observará el siguiente procedimiento:

(a) Síndico liquidador. - Cuando la Corporación ordene la disolución de una cooperativa asegurada, ésta actuará como síndico liquidador a través de funcionarios de la propia Corporación o a través de un tercero contratado. En todo caso, el funcionario o agente representante de la Corporación será una persona de integridad y reputación moral intachable que cuente con los conocimientos gerenciales, financieros, contables y comerciales que le capaciten para efectuar un proceso de liquidación que maximice el rendimiento del proceso de liquidación. Toda designación de un agente representante de la Corporación para fines de liquidación será avalada por la Junta de Directores de la Corporación.

(b) Aviso de disolución. - La Corporación notificará la disolución de la cooperativa mediante la publicación de un aviso en por lo menos un (1) diario de circulación general.

(c) Activos de la cooperativa. - Durante el proceso de liquidación, el síndico liquidador convertirá en dinero los activos de la cooperativa en trámite de liquidación e iniciará las reclamaciones que en derecho procedan, pagará las deudas conforme con el procedimiento establecido en el inciso (e) de este Artículo y distribuirá el remanente de dichos activos, si alguno, en la forma que corresponda. También notificará el hecho de la disolución de la cooperativa a los acreedores conocidos al momento de publicar el aviso de disolución de la misma.

(d) Reclamaciones y acciones de nulidad. - Cualquier socio o persona que tenga una reclamación contra una cooperativa en proceso de liquidación deberá presentarla ante el síndico liquidador dentro de los noventa (90) días siguientes de la fecha de publicación del aviso de disolución. Igualmente, toda persona que tenga intención de iniciar una acción legal con el fin de impedir o anular el procedimiento de liquidación de una cooperativa deberá presentar la acción correspondiente ante la Sala del Tribunal de Primera Instancia del lugar de su residencia, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación del aviso de disolución. El peticionario notificará dicha acción a la Corporación, con copia de su petición de anulación.

(e) Orden de efectuar la liquidación y distribución de activos.- En todo caso de disolución de una cooperativa, los activos de la misma se liquidarán y distribuirán entre las siguientes categorías de pagos o acreedores en el orden de prioridades a continuación indicado y después del término fijado en esta Ley para la presentación de todas las reclamaciones:

- (1) gastos incurridos en el proceso de liquidación;
- (2) acciones y depósitos asegurados;
- (3) repago a la Corporación por las cantidades que ésta haya pagado a los socios y depositantes asegurados; y
- (4) obligaciones y depósitos de socios, depositantes y acreedores no asegurados.

Cuando después de pagar en su totalidad una categoría precedente, los fondos remanentes no sean suficientes para pagar en su totalidad a los acreedores de la próxima categoría, la cantidad disponible se distribuirá en forma prorrateada entre los acreedores de la categoría que corresponda pagar. El pago de las cuentas aseguradas deberá hacerse a la brevedad posible.

(f) Derecho de subrogación.- Una vez se haya decretado la liquidación de una cooperativa asegurada, la Corporación se subrogará en los derechos que tengan los socios y depositantes contra dicha cooperativa por la cantidad que haya pagado a éstos o los derechos que tengan los socios, los depositantes o la propia cooperativa contra los miembros de los cuerpos directivos o los funcionarios ejecutivos por cualesquiera violaciones a sus deberes fiduciarios o por sus actuaciones negligentes o culposas que hayan generado pérdidas a la cooperativa o a la Corporación.

La Corporación retendrá de la cantidad que deba pagarse a los socios y a los depositantes de la cooperativa, las cantidades necesarias para responder del pago de cualquier obligación, que no pueda ser objeto de compensación, que el socio o depositante tenga con la cooperativa.

La Corporación en su capacidad de liquidador de la cooperativa asegurada, pasará a las cuentas de la Corporación la cantidad de los activos convertidos en dinero que le corresponda recibir por el hecho de haberse subrogado en las reclamaciones de los socios y depositantes de la cooperativa. Después de que se convierta en dinero todos los activos y se hagan los pagos descritos en el inciso (e) de este Artículo, cualquier remanente se distribuirá entre todos los socios.

(g) Término de liquidación e informe final. - El síndico liquidador deberá concluir todo el procedimiento, de disolución dentro del término estipulado con la Corporación. Tan pronto el síndico liquidador concluya sus deberes y responsabilidades, rendirá un informe final a la Corporación, el cual deberá juramentarse ante notario público y entregarse a ésta en original y tres (3) copias de dicho informe.

(h) Participaciones no reclamadas. - En los casos que no se puedan localizar las personas con derecho a recibir una participación de la liquidación, o cuando éstas no hayan reclamado su derecho, la Corporación retendrá las cantidades correspondientes estableciendo las reservas necesarias por un período que no excederá de cinco (5) años contados a partir del aviso de liquidación dispuesto en el Artículo 8.11 (b) de esta Ley, o de noventa (90) días contados a partir de la entrega del informe final del síndico liquidador, lo que ocurra primero.

(i) Certificado de disolución. - Tan pronto la Corporación apruebe el informe final del síndico liquidador lo notificará al Secretario de Estado de Puerto Rico, quien procederá a registrarlo y a expedir el certificado de disolución de la cooperativa. La Corporación, a su vez, cancelará el permiso de la cooperativa para funcionar como tal.

La Corporación será el custodio de los libros y documentos de la cooperativa y los documentos que crea pertinentes por un período no menor de tres (3) años, a partir de la fecha de cancelación del certificado de registro.

CAPÍTULO IX

PROHIBICIONES Y PENALIDADES

Artículo 9.01 - Uso Exclusivo de Nombre de Cooperativa de Ahorro y Crédito

(a) Se prohíbe a toda persona natural o jurídica que no sea una sociedad organizada y registrada de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, el uso o identificación bajo el nombre de "Cooperativa de Ahorro y Crédito". Se prohíbe, además, a toda persona natural o jurídica que no sea una entidad cooperativa reconocida utilizar como nombre, nombre comercial, marca o designación de sí misma o de sus productos, bienes o

servicios el término “cooperativa” o “COOP”. A los fines de este Artículo, se considerará como una entidad cooperativa reconocida exenta de esta restricción a:

- (1) la Liga de Cooperativas de Puerto Rico;
 - (2) todo asegurador cooperativo debidamente organizado y autorizado al amparo del Capítulo 34 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como Código de Seguros de Puerto Rico;
 - (3) el Banco Cooperativo de Puerto Rico;
 - (4) toda entidad organizada y registrada de acuerdo con las disposiciones de la Ley Núm. 50 de 4 de agosto de 1994, conocida como “Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico”; y
 - (5) toda sociedad organizada y registrada de acuerdo a las disposiciones de esta Ley, incluyendo corporaciones sin fines de lucro controladas cien por ciento (100%) por éstas y las subsidiarias, afiliadas y empresas cooperativas contempladas en el Artículo 2.06 de esta Ley.
- (b) Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en delito grave y convicta que fuere será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de un (1) año o multa máxima de mil (1,000) dólares o ambas penas a discreción del tribunal.

Artículo 9.02 - Restricciones en la Otorgación de Préstamos a Entidades Jurídicas Con Fines de Lucro

Las cooperativas no podrán conceder préstamos a las personas jurídicas, corporaciones, sociedades, asociaciones u organizaciones privadas que operen con ánimo de lucro, excepto en el caso de préstamos comerciales a entidades que sean pequeños y medianos comerciantes controlados por personas naturales que son socios de la cooperativa o en casos de proyectos, sectores económicos o actividades de alto interés público o con potencial de generación de nuevos empleos. Se faculta a la Corporación a disponer mediante determinación administrativa o mediante reglamentación la elegibilidad de pequeños y medianos comerciantes, préstamos, proyectos, sectores económicos o actividades conforme con lo dispuesto en este Artículo. La cooperativa podrá conceder y ofrecer a estas entidades todos aquellos préstamos y servicios permitidos por esta Ley, incluyendo los descritos en los Artículos 2.02 y 2.04, sin las limitaciones dispuestas en el Artículo 2.03.

Cualquier cooperativa que viole lo establecido en este Artículo o en el reglamento adoptado al amparo del mismo, estará sujeta a que la Corporación le imponga una multa administrativa no mayor de cinco mil (5,000) dólares por cualquier violación a este Artículo.

Artículo 9.03 - Multas Administrativas

- (a) La Corporación podrá imponer, a cualquier cooperativa que incurra en violaciones a las disposiciones de esta Ley o de los reglamentos adoptados al amparo de la misma o que viole las resoluciones u órdenes y a cualquier miembro de los cuerpos directivos o cualquier funcionario ejecutivo o empleado de éstas que sea responsable de dicha violación, una multa administrativa no mayor de cinco mil (5,000) dólares.
- (b) La Corporación podrá imponer multas administrativas de hasta cien (100) dólares diarios a cualquier cooperativa que deje de rendir cualquier informe que le requiera la Corporación.

Artículo 9.04 - Responsabilidad por Violaciones a la Ley

Se entenderá que cualquier violación a las disposiciones de esta Ley en que incurra una cooperativa, la comete también el funcionario o empleado de la misma responsable de acuerdo con sus obligaciones, según los reglamentos, políticas y procedimientos de la

cooperativa. De no haberse asignado tal responsabilidad de forma expresa a ningún funcionario o empleado de la cooperativa mediante reglamentos, políticas y procedimientos, serán responsables todos los miembros de la Junta de Directores y de los comités de la cooperativa, a menos que dicho miembro pruebe que no tenía conocimiento o que realizó todas las gestiones y esfuerzos razonables para prevenir el que se incurriera en la violación de que se trate. La continuación de cualquier acto u omisión que constituya una violación a las disposiciones de esta Ley se considerará una nueva ofensa por cada semana subsiguiente en que se persista en la comisión u omisión en cuestión.

Artículo 9.05 - Delitos Graves

(a) Incurrirá en delito grave y convicto que fuere será castigado con pena de reclusión por un término fijo de seis (6) años, todo miembro de la Junta de Directores, de los comités y todo funcionario ejecutivo, empleado o agente de una cooperativa que:

(1) sustraiga o haga una indebida aplicación de dinero, fondos o créditos de una cooperativa o de valores existentes en la misma;

(2) sin estar debidamente autorizado a emitir o expedir algún certificado de depósito, libre alguna orden o letra de cambio, traspase algún pagaré, bono, giro, letra de cambio, haga alguna aceptación o haga algún asiento falso en cualquier libro, informe, estado de situación de la cooperativa, con la intención de defraudar a la misma o con -la intención de defraudar a cualquier otra persona natural o jurídica o a cualquier otra entidad cooperativa, o con la intención de engañar a la Corporación o a cualquier otro funcionario ejecutivo o persona nombrada para auditar, examinar o investigar los asuntos de la cooperativa de ahorro y crédito;

(3) reciba cualquier honorario, comisión, regalo o cosa de valor de cualquier persona, firma o corporación por conseguir o tratar de conseguir cualquier préstamo o la compra o descuento de cualquier documento, pagaré, giro, cheque o letra de cambio de cualquier cooperativa; o

(4) reciba cualquier beneficio por la prestación de cualquier servicio que de ordinario prestaría la cooperativa a la persona si cumple con los requisitos estipulados por ésta.

(b) Asimismo, incurrirá en delito grave y convicta que fuere será sancionada con la pena de reclusión por un término fijo de seis (6) años, toda persona que:

(1) con la intención de defraudar o de engañar, ayude o permita que cualquier miembro de la Junta o de los comités, funcionario ejecutivo, empleado o agente de una cooperativa incurra en cualesquiera de los actos descritos en los incisos (1), (2), (3) y (4) de este Artículo; o

(2) brinde información falsa en cualquier solicitud o documento mediante el cual se creará, transfiriera, terminare o afectare cualquier derecho, obligación o interés, o sea, dar información falsa en solicitudes de crédito, pagarés o cualquier otro documento con la intención de defraudar a la cooperativa.

(c) De mediar circunstancias agravantes en uno o más de los actos anteriores, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de diez (10) años; de mediar circunstancias atenuantes, se podrá reducir a un mínimo de cuatro (4) años. El tribunal podrá imponer la pena de restitución, en adición a la pena de reclusión establecida, en cualquiera de las modalidades anteriormente señaladas o ambas penas, a su discreción.

(d) Incurrirá en delito grave y convicta que fuere será castigada con multa mínima de diez mil (10,000) dólares o suspensión de su certificado de incorporación u organización por un término mínimo de un año, o ambas penas a discreción del Tribunal, toda persona jurídica no cooperativa que intente controlar, limitar, influenciar o de alguna manera interferir ilegalmente con las potestades, facultades y actuaciones de las cooperativas organizadas de conformidad con esta Ley.

Artículo 9.06 - Delitos Contra los Fondos de las Cooperativas Será sancionado con pena de -reclusión por un término fijo de ocho (8) años todo miembro de la Junta, de los comités, funcionario, empleado o agente de una cooperativa y toda persona encargada de recibir, guardar, traspasar o desembolsar fondos de una cooperativa que realice uno o más de los siguientes actos:

- (a) sin autoridad legal se los apropie, en todo o en parte, para beneficio particular o el de otra persona;
- (b) los preste, en todo o en parte, o especule con ellos o los utilice para cualquier objeto no autorizado por esta Ley;
- (c) no los conserve en su poder hasta desembolsarlos o entregarlos conforme con la autorización de ley;
- (d) los deposite ilegalmente, todos o parte de ellos, en alguna cooperativa, banco o institución financiera, o en poder de otra persona;
- (e) lleve alguna cuenta falsa o haga algún asiento falso de dichos fondos, o que se relacione con los mismos;
- (f) altere, falsifique, oculte, destruya o tache cualquier cuenta o documento que se relacione con ellos;
- (g) se niegue o deje de pagar a su presentación cualquier letra, orden o ibramiento girado por autoridad competente contra los fondos en su poder;
- (h) deje de traspasar los mismos, en los casos en que por ley o reglamento se exija dicho traspaso;
- (i) deje o se niegue a entregar a algún funcionario u otra persona autorizada por la ley para su recepción, cualquier cantidad de dinero que por ley esté en la obligación de entregar;
- (j) canjee o convierta los fondos en metálico, en papel u otra moneda corriente o instrumento negociable sin autoridad legal para ello; o
- (k) descuide o deje de guardar o desembolsar los fondos en la forma dispuesta en esta Ley o en sus reglamentos.

Toda persona que no sea miembro de la Junta, de los comités ni funcionario ejecutivo, empleado o agente de una cooperativa que sea culpable de uno o más de los actos prohibidos en este Artículo, independientemente de si obtuvo o no lucro económico personal, será sancionada con la pena aquí dispuesta.

Artículo 9.07 - Informaciones Lesivas

Cualquier persona que a sabiendas y maliciosamente haga, circule o transmita cualquier manifestación, rumor o indicación escrita, impresa o verbal, que redunde directa o indirectamente en el descrédito de la institución, sus cuerpos directivos o sus funcionarios ejecutivos, o que afecte la solvencia o liquidez de una cooperativa de ahorro y crédito, o que aconseje, ayude, procure o induzca a otra persona o entidad a que origine, transmita o circule cualquier manifestación o rumor de tal naturaleza, será culpable de delito grave y, convicta que fuere, será castigada con multa no menor de mil (1,000) dólares o con prisión por término no mayor de cinco (5) años, o ambas penas, a discreción del Tribunal. Disponiéndose que no se considerará violación a este Artículo las manifestaciones veraces verbales o escritas vertidas para récord por los socios de la cooperativa en el transcurso de los trabajos de las asambleas ordinarias y extraordinarias de la institución.

Artículo 9.08 - Investigador Especial

En todo caso que la Corporación tenga motivos fundados para creer que cualquier socio, miembro de los cuerpos directivos, funcionario ejecutivo de una cooperativa o cualquier otra persona ha incurrido en cualquier acto constitutivo de delito de acuerdo con esta Ley, o con la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Código

Penal de Puerto Rico de 1974, o a cualquier otra ley aplicable a las cooperativas, deberá solicitar al Secretario de Justicia que realice una investigación especial al respecto. El Secretario de Justicia deberá dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de tal solicitud, designar el fiscal que estará a cargo de la investigación.

Artículo 9.09 - Fondo de Investigación de Cooperativas

Las multas administrativas que se cobren en virtud de las disposiciones de esta Ley ingresarán al fondo general de la Corporación.

CAPÍTULO X

DEBERES FIDUCIARIOS Y CONFLICTOS DE INTERESES

Artículo 10.01 - Deberes

(a) Los miembros de los cuerpos directivos de una cooperativa están sujetos a un deber de fiducia para con la cooperativa. Este deber de fiducia incluye el deber de diligencia y el deber de lealtad para con la cooperativa, así como el deber de Velar y de cuidar como un buen padre de familia de los bienes y operaciones de la cooperativa, así como de los haberes, acciones y depósitos de socios y depositantes que obran en la institución.

(b) Los miembros de los cuerpos directivos, delegados y empleados de una cooperativa no podrán incurrir en conflictos de intereses directos ni indirectos con relación a la cooperativa. Todo miembro de los cuerpos directivos, delegado y empleado de la cooperativa estará sujeto a las siguientes prohibiciones éticas de carácter general:

(1) No solicitará o aceptará de persona alguna, directa o indirectamente, para él, para algún miembro de su unidad familiar, ni para cualquier otra persona, negocio o entidad, bien alguno de valor económico, incluyendo descuentos, propinas, regalos, préstamos, favores o servicios a cambio de que la actuación del miembro de la Junta o de un comité, delegado, o el empleado, esté influenciada a favor de esa o cualquier otra persona.

(2) No revelará o usará información o documentos adquiridos durante el desempeño de su función o empleo para propósitos ajenos al mismo.

Todo miembro de un cuerpo directivo, delegado o empleado mantendrá la confidencialidad de aquellos asuntos relacionados con su función o empleo, según aplique, a menos que reciba una solicitud que requiera la divulgación de algún asunto y que ello esté permitido por autoridad competente.

(3) No obtendrá lucro personal aprovechándose de la posición que ocupa.

(4) Ningún miembro de un cuerpo directivo, delegado, o empleado de la cooperativa aceptará honorarios, compensación, regalos, pago de gastos o cualquier otro beneficio con valor monetario en circunstancias que su aceptación pueda resultar en, o crear la apariencia de un conflicto de intereses con relación a sus deberes y responsabilidades en la cooperativa.

(5) Ningún miembro de un cuerpo directivo o empleado de la cooperativa que esté autorizado para contratar a nombre de la cooperativa podrá llevar a cabo un contrato entre la cooperativa y una entidad o negocio en el que él o algún miembro de la unidad familiar tenga, directa o indirectamente, interés pecuniario.

(c) La Junta de toda cooperativa tendrá el deber de promulgar normas internas dirigidas a proteger la integridad y evitar los conflictos de interés en la cooperativa, las cuales serán compatibles con las disposiciones de esta Ley y con la reglamentación aplicable que adopte la Corporación. Las normas incluirán como mínimo, lo siguiente:

(1) prohibiciones éticas relacionadas con otros cargos, empleos, contratos o negocios;

(2) prohibiciones éticas relacionadas con la representación de intereses privados conflictivos con los intereses de la cooperativa; y

(3) deber de los miembros de los cuerpos directivos, delegados o empleados de informar a la Junta de Directores sobre posibles situaciones de conflictos de intereses.

(d) La Corporación mediante reglamento podrá establecer normas adicionales de ética aplicables, a miembros de los cuerpos directivos, delegados y empleados de una cooperativa de ahorro y crédito. Entre dichas normas incluirá normas que atiendan los conflictos de intereses que surgen de relaciones familiares entre los distintos componentes y organismos de la cooperativa.

CAPÍTULO XI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 11.01 - Convenios, Acuerdos, Contratos y Reglamentos Vigentes a la Aprobación de esta Ley

Ninguna disposición de esta Ley se entenderá que modifica, altera o invalida cualquier acuerdo, convenio o contrato que esté vigente a la fecha de entrar en vigor esta Ley, que se haya otorgado al amparo de la Ley Núm. 1 de 15 de junio de 1973, según enmendada, conocida como ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito”, derogada por la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, o al amparo de dicha Ley Núm. 6, que aquí se deroga.

Los reglamentos, órdenes, acuerdos, procedimientos administrativos, contratos y demás actuaciones de la Corporación y del Comisionado de Instituciones Financieras iniciados, aprobados o adoptados previo a la aprobación de esta Ley continuarán vigentes, hasta tanto los mismos sean modificados o derogados por la Corporación de conformidad con las disposiciones de esta Ley.

Artículo 11.02 - Procedimientos Iniciados antes de la Aprobación de esta Ley

Todo procedimiento de organización de una cooperativa y toda acción, reclamación o acción pendiente ante el Comisionado de Instituciones Financieras o ante la Corporación o ante cualquier tribunal, a la fecha de aprobación de esta Ley, que se haya iniciado conforme con las disposiciones de la Ley Núm. 1 de 15 de junio de 1973, según enmendada, o conforme con las disposiciones de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, se continuarán tramitando hasta su determinación o resolución final y firma de acuerdo con las leyes y reglamentos en vigor a la fecha en que tales procedimientos, acciones o reclamaciones se hayan presentado o iniciado.

Artículo 11.03 - Otras Leyes Aplicables

La Ley Núm. 50 de 4 de agosto de 1994, conocida como “Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico”, así como cualquier estatuto sucesor de dicha ley, será supletoria a esta Ley y sus disposiciones, así como los reglamentos adoptados en virtud de la misma, serán de aplicación a las cooperativas de ahorro y crédito, en la medida que no estén en conflicto con las disposiciones de esta Ley.

Artículo 11.04 - Cláusula Derogatoria

Se deroga la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, conocida como “Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 1989”.

Artículo 11.05 -Separabilidad

Si cualquier disposición de esta Ley fuera declarada inconstitucional, en todo o en parte, por un tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada no afectará ni invalidará el resto de esta Ley, y su efecto se limitará a la cláusula, párrafo, artículo o parte declarada inconstitucional.

Artículo 11.06 - Vigencia

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

- **Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas, Ley de las enmiendas**
Ley Núm. 163 de 10 de agosto de 2002
(P. de la C. 2261)

Para enmendar la Exposición de Motivos, los Artículos 4, 5, 9 y 20, y añadir un inciso (y) al Artículo 3 de la Ley Número 114 de 17 de agosto de 2001, conocida como la "Ley de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con la política pública de desarrollo del Movimiento Cooperativista en Puerto Rico y con el propósito de consolidar las funciones de fiscalización, supervisión y asegurador en un sólo organismo gubernamental, la Legislatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico aprobó la Ley Núm. 114 de 17 de agosto de 2001, en adelante "la Ley", mediante la cual se crea la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico, conocida mediante sus siglas COSSEC.

En este momento es necesario enmendar la ley antes mencionada a los fines de corregir errores en cuanto a términos cronológicos, numéricos, de expresión y tipográficos contenidos en los diferentes artículos, así como para otorgar a la Corporación plenos poderes de supervisión y fiscalización sobre los depósitos de fondos públicos y cuentas de aportación educativa en las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Por otro lado, la presente legislación aclara disposiciones relativas a la fusión, consolidación, venta de activos y pasivos de las cooperativas en disolución, la elección de los representantes del movimiento cooperativo y elimina el procedimiento para la elección de vacantes en la Junta de Directores del Artículo 5(c)(4)(v) para establecer como único procedimiento el contenido en el Artículo 5(c)(6) debido a la duplicidad de procedimientos inconsistentes contenidos en la legislación.

Asimismo, conscientes de la importancia de lograr que la legislación facilite el reclutamiento de personal idóneo para dirigir a la Corporación y con el propósito de atemperar a la realidad el estado actual de los representantes del sector gubernamental, se enmiendan y flexibilizan las condiciones de selección requeridas a los Directores de la Junta de la Corporación.

Las presentes enmiendas pretenden facilitar el descargo de las responsabilidades y funciones de la Corporación a los fines de lograr que el movimiento cooperativo pueda desarrollar al máximo su potencial y contribuir al desarrollo socio económico del país.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Se enmiendan el cuarto y quinto párrafo de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 114 de 17 de agosto de 2001, para que lean como sigue:

A los fines de viabilizar la implantación y adelanto de estos principios, se adopta la presente Ley para consolidar las facultades de supervisión y fiscalización bajo las leyes cooperativas y financieras.

A tenor con lo anterior, se aumenta la cantidad de miembros de la Junta Financiera en la Oficina del Comisionado de siete (7) a nueve (9) miembros, incluyendo al Comisionado."

Artículo 2.-Se añade un inciso (y) al Artículo 3 de la Ley 114 de 17 de agosto de 2001, para que lea como sigue:

"Artículo 3.-Definiciones

A los fines de esta Ley, los siguientes términos y frases tendrán el significado que a continuación se expresa:

- (a) ...
- (b) ...
- (c) ...
- (d) ...
- (e) ...
- (f) ...
- (g) ...
- (h) ...
- (i) ...
- (j) ...
- (k) ...
- (l) ...
- (m) ...
- (n) ...
- (o) ...
- (p) ...
- (q) ...
- (r) ...
- (s) ...
- (t) ...
- (u) ...
- (v) ...
- (x) ...

(y) "Interés económico sustancial", significa aquel interés económico que implique control directo o indirecto."

Artículo 3.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 114 de 17 de agosto de 2001, para que se lea como sigue:

"Artículo 4.- Facultades de la Corporación:

- (a) ...
- (b) ...

(c) Con el propósito de facultar a la Corporación de plenos poderes y facultades para el desempeño de la función de fiscalización y supervisión comprensiva y consolidada de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, por la presente se transfieren a la Corporación todas las funciones, poderes y deberes de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, de la Oficina del Inspector de Cooperativas, del Secretario de Hacienda y de cualquier otra agencia, organismo o entidad gubernamental relacionados con la supervisión, fiscalización e implantación de las siguientes disposiciones de Ley en su aplicación a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, sus afiliadas y los negocios y operaciones de éstas:

(1) La Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, conocida como "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 1989"; Ley Núm. 50 de 4 de agosto de 1994, conocida como "Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico"; Ley Núm. 106 de 28 de junio de 1965, según enmendada, conocida como "Ley de Préstamos Personales Pequeños"; Ley Núm. 97 de 5 de junio de 1973, según enmendada, conocida como "Ley de Instituciones Hipotecarias"; Ley Núm. 20 de 8 de mayo de 1973, según

enmendada, conocida como "Ley de Instituciones de Arrendamiento de Propiedad Mueble"; Ley Núm. 76 de 13 de agosto de 1994, según enmendada, conocida como "Ley para Regular los Contratos de Arrendamientos de Bienes Muebles"; Ley Núm. 106 de 6 de agosto de 1996, conocida como "Ley para Regular el Negocio de Transferencias Monetarias"; Ley Núm. 131 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley sobre Transferencias de Fondos al Extranjero"; Ley Núm. 60 de 18 de junio de 1963, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Valores"; Ley Núm. 6 de 19 de octubre de 1954, según enmendada, conocida como "Ley de Compañías de Inversiones de Puerto Rico"; Ley Núm. 17 de 18 de abril de 1933, según enmendada; Ley Núm. 10 de 7 de marzo de 1951; Ley Núm. 68 de 19 de junio de 1964, según enmendada, conocida como "Ley de Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento"; Ley Núm. 214 de 14 de octubre de 1995, según enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar el Negocio de Intermediación Financiera"; la Sección 1169 y 1172 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de 1994"; Ley Núm. 69 de 14 de agosto de 1991, conocida como "Ley para Regular los Depósitos de Fondos Públicos y para proveer sobre su Seguridad".

(2) ...

(3) ...

(4) ...

(5) Todas aquellas leyes, reglamentos, órdenes, permisos, memorandos de entendimiento, cartas circulares y demás determinaciones administrativas vigentes al 17 de agosto de 2001, aplicables a las Cooperativas emitidas por las agencias transferentes se mantendrán en vigor hasta tanto sean modificadas o dejadas sin efecto por la Corporación.

(d) ..."

Artículo 4.-Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 114 de 17 de agosto de 2001, para que se lea como sigue:

"Artículo 5. - Junta de Directores

(a) ...

(b) Representación Gubernamental Ninguno de los integrantes de la Junta de Directores, excepto el Secretario de Hacienda, podrá delegar sus funciones en otro funcionario, ni podrá ocupar cargos directivos ni poseer un interés económico sustancial en ninguna institución financiera privada.

(c) Representación de las cooperativas.

(1) A los fines de proveer al Movimiento Cooperativo de representación inmediata en la Junta de Directores, dentro de los treinta (30) días siguientes a la aprobación de esta Ley el Gobernador designará los primeros (4) representantes de las Cooperativas Aseguradas como sigue:

A. Dos (2) personas que sean el principal funcionario ejecutivo de Cooperativas Aseguradas; y

B. Dos (2) personas que sean miembros de juntas de directores de Cooperativas Aseguradas.

A los fines de escalonar los cargos de los representantes del Movimiento Cooperativo, un director que sea el principal funcionario ejecutivo y un director que sea miembro de una junta de directores ocuparán sus cargos por dos (2) años; un director que sea el principal funcionario ejecutivo y un director que sea miembro de una junta de directores ocuparán sus cargos por un (1) año. Los sucesores de los primeros cuatro representantes del Movimiento Cooperativo serán electos por las Cooperativas Aseguradas según se dispone en el inciso dos (2) que sigue a continuación.

(2) Los subsiguientes miembros de la Junta en representación de las Cooperativas Aseguradas serán seleccionados exclusivamente por las Cooperativas acogidas al Seguro de Acciones y Depósitos. Las Cooperativas Aseguradas elegirán como directores a dos (2) personas que sean miembros de juntas de directores de dichas Cooperativas y (2) personas que sean el principal funcionario ejecutivo de Cooperativas Aseguradas. Disponiéndose, que en ningún caso podrá más de un representante de las Cooperativas corresponder a una misma Cooperativa. Los directores electos ocuparán sus cargos por el término de tres (3) años. Ningún director ocupará dicho cargo por más de tres (3) términos consecutivos. Los seleccionados no podrán ocupar cargos directivos ni ser empleados de agencias gubernamentales relacionadas con el Movimiento Cooperativo, salvo por aquellos dispuesto en esta Ley.

(3) ...

(4) ...

(i)

(ii)

(iii)

(iv) ...

(5) ...

(6) En caso de surgir una vacante en los puestos de directorio en representación del Movimiento Cooperativo, se procederá a notificar inmediatamente a la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, quién tendrá la responsabilidad de establecer el mecanismo de la consulta y selección entre las cooperativas aseguradas, ya ,sea representante de la Junta de Directores o principales funcionarios ejecutivos de cooperativas aseguradas; disponiéndose que la persona a ser designada deberá cumplir con los requisitos en esta Ley. El representante designado por el método establecido por la Liga de Cooperativas ocupará el cargo hasta el término que quedaba al provocarse la vacante.

(d) El miembro de la Junta en representación del interés público será designado conjuntamente por el voto de tres cuartas (3/4) partes del total de ocho (8) miembros de la Junta de Directores en representación del sector gubernamental y del sector cooperativo. El representante del interés público será nombrado por un término de tres (3) años y ocupará su cargo hasta que su sucesor sea nombrado y ocupe el cargo. Este deberá ser una persona de reconocida probidad moral y conocimiento e interés en el campo cooperativista y financiero. El representante del interés público no podrá ser empleado ni ocupar cargos directivos en ninguna institución financiera privada, en ninguna Cooperativa de Ahorro y Crédito asegurada, ni en ningún organismo cooperativo central. Tampoco podrá tener un interés económico sustancial en ninguna institución financiera privada.

Los miembros de la Junta no recibirán compensación o remuneración alguna por el desempeño de sus funciones, pero a los que no sean funcionarios o empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se les podrá pagar una dieta y los gastos de viajes en que incurran por cada día de reunión de la Junta o por desempeñar cualquier función o encomienda que le delegue el Presidente de la Junta, de acuerdo al reglamento que al efecto adopte la Junta. Serán elegibles, además, para ser cobijados por las disposiciones del Artículo 12 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, adicionado por la Ley Núm. 9 de 26 de noviembre de 1975, según enmendada."

Artículo 5.-Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 114 de 17 de agosto de 2001, para que lea como sigue:

"Artículo 9.-Presidente Ejecutivo

El Presidente Ejecutivo de la Corporación será nombrado por el voto de dos terceras (2/3) partes del total de los miembros de la Junta, con la aprobación del Gobernador del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico. Este será el Principal Funcionario Ejecutivo de la corporación, ejercerá aquellas funciones y facultades que establece la ley y que le delegue la Junta y devengará el salario que ésta autorice. El Presidente Ejecutivo tendrá, entre otros, los siguientes poderes y deberes:

- (a) ...
- (b) ...
- (c) ...
- (d) ...
- (e) ...
- (f) ...
- (g)
- (h) ...
- (i) ...
- (j) ...
- (k) ...
- (l) ...
- (m) ...
- (n) Determinar, acorde con las reglas adoptadas por la Junta y las dispuestas por esta Ley y sus reglamentos, la elegibilidad de cualquier cooperativa para acogerse al seguro de acciones y depósitos o para continuar como entidad asegurada, incluyendo los casos de fusión, adquisición de activo y pasivo o consolidación de cooperativas.
- (o) ...
- (p) ...
- (q) ...
- (r) ...
- (s) ...”

Artículo 6.-Se enmienda el Artículo 20 de la Ley Núm. 114 de 17 de agosto de 2001, para que lea como sigue:

"Artículo 20.-Sindicatura, Fusión, Consolidación, Compra de Activos y Pasivos o Liquidación de Cooperativas Aseguradas en Caso de Insolvencia o Riesgo de Insolvencia La Corporación podrá emitir una orden provisional para colocar a una Cooperativa Asegurada bajo su administración cuando, después de una auditoria, investigación, examen o inspección se demuestre a juicio de la Corporación, que la Cooperativa se encuentra en una o más de las situaciones siguientes:

1. Carece de una situación económica y financiera sólida.
2. No cuenta con controles internos efectivos para la administración de sus asuntos
3. No tiene reservas adecuadas.
4. Su contabilidad no está al día, ni en forma razonablemente correcta para continuar operaciones.
5. Se está administrando de forma tal que los socios, las personas o entidades con depósitos en la misma, están en peligro de ser defraudados.

No será necesario celebrar una vista antes de emitir una orden cuando a juicio de la Corporación la situación de la Cooperativa sea una de emergencia, en cuyo caso la Corporación tomará posesión y control inmediato de la Administración de la Cooperativa según el reglamento que para estos fines adopte la misma.

En estos casos, deberá celebrarse una vista administrativa dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación de la orden para determinar si la misma se hace permanente o se revoca. En situaciones donde no existe una emergencia, la vista se llevará a cabo previo a la emisión de la orden. En cualquiera de los casos, la vista

administrativa se llevará a cabo de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

Después que se lleve a cabo la fusión, consolidación, o venta de activos y pasivos de una Cooperativa Asegurada y que la Corporación cumpla con las prestaciones acordadas, las cuentas aseguradas de los socios y depositantes de la Cooperativa adquirida se convertirán en acciones y depósitos en la institución adquirente.

No obstante lo anterior, a juicio de la Corporación, ésta podrá emitir una orden para que la Cooperativa muestre causa por la cual no debe procederse con la liquidación, fusión, consolidación, o venta de activo o pasivo de cualquier Cooperativa Asegurada cuando coincidan las siguientes circunstancias:

1. Exista una emergencia que requiera una acción rápida con respecto a tal Cooperativa Asegurada.
2. No haya otra alternativa razonable que pueda asegurar la solvencia de la Cooperativa Asegurada.
3. Se determina que la fusión, consolidación o compra es la alternativa de menor costo para la Corporación.

No será necesario celebrar una vista antes de emitir una orden cuando a juicio de la Corporación la situación de la Cooperativa sea una de emergencia, en cuyo caso la Corporación tomará posesión y control inmediato de la Administración de la Cooperativa según el reglamento que para estos fines adopte la misma.

En estos casos, deberá celebrarse una vista administrativa dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación de la orden para determinar si la misma se hace permanente o se revoca. En situaciones donde no existe una emergencia, la vista se llevará a cabo previo a la emisión de la orden. En cualquiera de los casos, la vista administrativa se llevará a cabo de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

Cualquier transacción de fusión, consolidación, venta de activos y/o pasivos para liquidar y/o disolver una Cooperativa Asegurada deberá efectuarse con instituciones que sean cooperativas. Sin embargo, la Corporación podrá efectuar las referidas transacciones con instituciones que no sean cooperativas cuando las cooperativas no interesen llevar a cabo la transacción. Se dispone además, que ninguna entidad gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico emitirá órdenes u acciones administrativas decretando la administración, sindicatura, fusión, consolidación, compra de activos y pasivos o liquidación de ninguna Cooperativa Asegurada sin que dicha actuación cuente con la aprobación y visto bueno de la Corporación."

Artículo 7.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

- **Ley de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico.**

LEY NUM. 114 DE 17 DE AGOSTO DE 2001

Para reestructurar la Corporación de Seguro de Acciones y Depósitos de Cooperativas de Ahorro y Crédito; redefinir sus fines y propósitos; disponer su organización, estructura de capital y las normas de elegibilidad para que las cooperativas de ahorro y crédito puedan acogerse al Seguro de Acciones y Depósitos; autorizarla a reglamentar las operaciones de las cooperativas para salvaguardar su solvencia económica y facultarla para imponer

penalidades por violaciones a esta Ley; para derogar el subinciso (17) y reenumerar el subinciso (18) como subinciso (17) del Artículo 4 y enmendar el inciso (a) y el primer párrafo del inciso (b) del Artículo 8 de la Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, según enmendada; derogar la Ley Núm. 5 de 15 de enero de 1990, según enmendada, conocida como "Ley de la Corporación de Seguro de Acciones y Depósitos de Cooperativas de Ahorro y Crédito" y transferir todas las funciones y poderes del Comisionado de Instituciones Financieras y demás agencias públicas relacionadas con las cooperativas de ahorro y crédito.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Actualmente el Cooperativismo es atendido por cuatro agencias gubernamentales, tres de ellas con función reguladora y una de promoción. Estas son:

- * El Comisionado de Instituciones Financieras;
- * La Corporación de Seguro de Acciones y Depósitos de Cooperativas de Ahorro y Crédito (PROSAD-COOP);
- * El Inspector de Cooperativas; y
- * La Administración de Fomento Cooperativo.

Esta estructura gubernamental resulta redundante e ineficiente por las siguientes razones:

1. La fiscalización dual del Comisionado y PROSAD-COOP incrementa innecesariamente los costos para las Cooperativas, tanto en términos de los derechos por examen pagados individualmente como en el costo de personal de PROSAD-COOP, que es sufragado en su totalidad por las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
2. Los procesos de obtención de permisos se dilatan y complican, particularmente por la aplicación de parámetros de evaluación diferentes.
3. Contrario al proceso de incorporación de una corporación regular, el proceso de formación de entidades cooperativas está totalmente regulado, por lo que resulta lento, costoso y engorroso.
4. Las funciones de la Oficina del Inspector de Cooperativas se han visto afectadas por la falta de recursos adecuados.

Esta situación resulta incompatible con el desarrollo del Movimiento Cooperativo de Puerto Rico, el cual está revestido de alto interés público. Además, la estructura actual es inconsistente con el adelanto de la política pública del Estado Libre Asociado para el Cooperativismo de Ahorro y Crédito, la cual se fundamenta en los siguientes postulados:

- * Propiciar una supervisión y fiscalización justa, eficiente y efectiva.
- * Permitir el libre ofrecimiento de productos y servicios por parte de las cooperativas.
- * Viabilizar la canalización de recursos financieros hacia el financiamiento de actividad productiva, particularmente a pequeños y medianos comerciantes, empresas cooperativas y proyectos de autogestión.
- * Facilitar la creación de estructuras corporativas y cooperativas para viabilizar la incursión de las cooperativas de ahorro y crédito que cuenten con una condición financiera y gerencial sólida en las actividades permitidas a los demás participantes del mercado financiero.
- * Viabilizar la integración económica del sector de ahorro y crédito con otros sectores productivos.

A los fines de viabilizar la implantación y adelanto de estos principios, se adopta la presente ley para consolidar las facultades de supervisión bajo las leyes cooperativas y financieras.

A tenor con lo anterior, se aumenta la cantidad de miembros de la Junta Financiera en la Oficina del Comisionado de siete (7) miembros a once (11) miembros, incluyendo al Comisionado.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Título de la Ley

Esta Ley se conocerá como "Ley de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico".

Artículo 2.-Declaración de Política Pública

Es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico velar por la integridad, solvencia y fortaleza financiera del Movimiento Cooperativo de Puerto Rico.

Parte esencial de dicha política pública y responsabilidad esencial del estado es efectuar una supervisión y fiscalización justa, equitativa y efectiva de las Cooperativas bajo los siguientes principios:

(a) La función de fiscalización y supervisión total de las Cooperativas de Ahorro y Crédito y sus operaciones, productos y servicios estará consolidada y unificada de forma exclusiva en la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico.

(b) La formulación de política pública y reglamentación del Movimiento Cooperativo por parte de la Corporación contará con representación de las Cooperativas Aseguradas, según se dispone más adelante en esta Ley.

(c) Aquellos asuntos relativos a los procesos rectores de las Cooperativas, cuyos asuntos no presenten o impliquen riesgos relativos a la integridad económica, financiera, jurídica o moral de dichas instituciones o de sus socios serán objeto de auto reglamentación al amparo de aquellas reglas que adopte la Corporación con el concurso de su Junta, según se dispone más adelante en esta Ley.

Artículo 3.-Definiciones

A los fines de esta Ley, los siguientes términos y frases tendrán el significado que a continuación se expresa:

(a) "Acciones", significa la aportación que hace un socio de una Cooperativa al capital de la empresa.

(b) "Banco", significa el Banco Gubernamental de Fomento creado por la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, según enmendada.

(c) "Capital", significa el dinero que las Cooperativas Aseguradas aporten a la Corporación de acuerdo a esta Ley.

(d) "Comisionado de Instituciones Financieras", significa el funcionario designado por el Gobernador para dirigir la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras conforme a la Ley Núm.

4 de 11 de octubre de 1985, según enmendada, conocida como "Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras".

(e) "Cooperativa", significa toda entidad cooperativa debidamente constituida y autorizada para operar como tal, de acuerdo con las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo las cooperativas de ahorro y crédito.

(f) "Cooperativa de Ahorro y Crédito", significa toda entidad cooperativa de ahorro y crédito, federación de ahorro y crédito, debidamente constituida y autorizada para operar como tal, de acuerdo con las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Este término incluye, además, al Banco Cooperativo para fines de su asegurabilidad por parte de la Corporación bajo los términos y condiciones especiales que se dispone en esta Ley.

(g) "Cooperativas Aseguradas", significa las Cooperativas de Ahorro y Crédito acogidas al seguro de acciones y depósitos provistos por la Corporación.

- (h) "Corporación", significa la entidad corporativa designada como Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico creada por esta Ley.
- (i) "Depositante", significa cualquier persona natural o jurídica que mantenga depósitos en una Cooperativa de Ahorro y Crédito.
- (j) "Depósitos", significa todos los haberes, excepto acciones, que posea un socio y/o depositante en una Cooperativa de Ahorro y Crédito que estén evidenciados por certificados de depósitos, cuentas de ahorro, cuentas de cheques, cuentas de retiro individual, fondos de navidad o cualquier otro instrumento financiero de naturaleza similar.
- (k) "Emergencia", significa aquella condición de una Cooperativa que implica una probabilidad extremadamente alta de fracaso o de insuficiencia de liquidez, ya sea de inmediato o a corto plazo que implicaría el desembolso de fondos de la Corporación a los socios o depositantes asegurados o el riesgo de pérdida para socios de Cooperativas no aseguradas.
- (l) "Federación", significa la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito organizada de acuerdo con la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, también conocida como "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito".
- (m) "Fondo", significa el Fondo de Seguro de Acciones y Depósitos para Cooperativas de Ahorro y Crédito.
- (n) "Junta", significa la Junta de Directores de la Corporación.
- (o) "Organismo Cooperativo Central", significa aquellas entidades u organismos cooperativos cuyos únicos socios, accionistas o miembros sean Cooperativas. Este término incluye la Liga de Cooperativas, el Banco Cooperativo, la Cooperativa de Seguros Múltiples y la Cooperativa de Seguros de Vida.
- (p) "Pérdidas extraordinarias", significa las pérdidas incurridas por la Corporación en un año de operaciones, en exceso de la suma del ingreso neto de dicho año, incluyendo intereses, más el veinticinco (25) por ciento del balance acumulado de las reservas.
- (q) "Pérdidas incurridas", significa las reclamaciones que venga obligada a pagar la Corporación por concepto del seguro de acciones y depósitos, según se dispone en esta Ley, en un año de operaciones. Al determinar dichas pérdidas, se incluirán las reclamaciones reportadas y pagadas durante el año, así como aquellas reportadas en el curso del año que estén pendientes de pago al cierre de operaciones, más un estimado actuarial certificado de aquellas reclamaciones que se consideran incurridas durante el año y que no han sido identificadas o informadas, para las cuales se estime prudente reconocer las obligaciones correspondientes.
- (r) "Presidente Ejecutivo", significa el funcionario ejecutivo de más alto nivel y responsable de la dirección administrativa y operación diaria de la Corporación.
- (s) "Prima especial", significa la prima adicional a la prima regular que podrá imponerse a las Cooperativas de Ahorro y Crédito acogidas al Seguro de Acciones y Depósitos para el pago de pérdidas extraordinarias y cubiertas especiales o adicionales que decrete la Corporación.
- (t) "Prima regular", significa la cantidad anual que deberán pagar las Cooperativas de Ahorro y Crédito por el seguro de acciones y depósitos, computada a base de los tipos tarifarios que de tiempo en tiempo prescriba la Corporación.
- (u) "Prima suplementaria", significa la prima adicional a la prima regular que podrá adoptarse por razón de cubiertas especiales o adicionales que decrete la Corporación.
- (v) "Reservas", significa el total acumulado de recursos generados en el curso de las operaciones, excluyendo el capital que esté comprometido para atender obligaciones.
- (w) "Seguro de acciones y depósitos", significa el seguro y la garantía que proveerá la Corporación a los socios y depositantes de una Cooperativa de Ahorro y Crédito de que sus acciones y depósitos estarán protegidos hasta determinada cantidad contra pérdidas.

(x) "Socio", significa toda persona natural o jurídica sin fines pecuniarios que sea admitida como miembro de una Cooperativa.

Artículo 4.-Facultades de la Corporación

(a) La entidad corporativa denominada "Corporación de Seguros de Acciones y Depósitos de Cooperativas de Ahorro y Crédito", creada en virtud de la Ley Núm. 5 de 15 de enero de 1990, según enmendada, es por la presente redesignada como Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico. Se dispone por la presente para la continuidad jurídica, operacional y financiera de dicha entidad corporativa, sujeta a las disposiciones de la presente Ley a partir de su aprobación.

(b) La Corporación tendrá la responsabilidad primordial de:

(1) Fiscalizar y supervisar de forma comprensiva y consolidada a las Cooperativas de Ahorro y Crédito que operen o hagan negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, velando de manera exclusiva por el fiel cumplimiento por parte de dichas Cooperativas de Ahorro y Crédito de todas aquellas leyes presentes y futuras relativas a sus operaciones, negocios, productos y/o servicios;

(2) Proveer a todas las Cooperativas de Ahorro y Crédito un seguro de acciones y de depósitos, según requerido en esta Ley; Disponiéndose que la aplicación de dicho seguro al Banco Cooperativo será opcional y no mandatorio;

(3) Velar por la solvencia económica de las Cooperativas, particularmente las de Ahorro y Crédito;

(4) Velar por los derechos y prerrogativas de los socios de toda Cooperativa, protegiendo sus intereses económicos, su derecho a estar bien informado y previniendo contra prácticas engañosas y fraudulentas en la oferta, venta, compra y toda otra transacción en o relativa a las acciones de Cooperativas.

(c) Con el propósito de facultar a la Corporación de plenos poderes y facultades para el desempeño de la función de fiscalización y supervisión comprensiva y consolidada de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, por la presente se transfieren a la Corporación todas las funciones, poderes y deberes de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, de la Oficina del Inspector de Cooperativas, del Secretario de Hacienda y de cualquier otra agencia, organismo o entidad gubernamental relacionados con la supervisión, fiscalización e implantación de las siguientes disposiciones de ley en su aplicación a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, sus afiliadas y los negocios y operaciones de éstas:

(1) La Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, conocida como "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 1989"; Ley Núm. 50 de 4 de agosto de 1994, conocida como "Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico"; Ley Núm. 106 de 28 de junio de 1965, según enmendada, conocida como "Ley de Préstamos Personales Pequeños"; Ley Núm. 97 de 5 de junio de 1973, según enmendada, conocida como "Ley de Instituciones Hipotecarias"; Ley Núm. 20 de 8 de mayo de 1973, según enmendada, conocida como "Ley de Instituciones de Arrendamiento de Propiedad Mueble"; Ley Núm. 76 de 13 de agosto de 1994, según enmendada, conocida como "Ley para Regular los Contratos de Arrendamientos de Bienes Muebles"; Ley Núm. 106 de 6 de agosto de 1996, conocida como "Ley para Regular el Negocio de Transferencias Monetarias"; Ley Núm. 131 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley sobre Transferencias de Fondos al Extranjero"; Ley Núm. 60 de 18 de junio de 1963, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Valores"; Ley Núm. 6 de 19 de octubre de 1954, según enmendada, conocida como "Ley de Compañías de Inversiones de Puerto Rico"; Ley Núm. 17 de 18 de abril de 1933, según enmendada; Ley Núm. 10 de 7 de marzo de 1951; Ley Núm. 68 de 19 de junio de 1964, según enmendada, conocida como "Ley de Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento"; Ley Núm. 214 de 14 de

octubre de 1995, según enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar el Negocio de Intermediación Financiera"; la Sección 1169 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, conocida como "Código de Rentas Internas de 1994".

(2) Las facultades y poderes de la Corporación para conceder licencias, permisos y autorizaciones al amparo de las antes citadas leyes están limitadas al ejercicio de dichas facultades en su aplicación a Cooperativas de Ahorro y Crédito, a sus afiliadas y a los negocios y operaciones de éstos.

(3) Excepto por la Oficina del Inspector de Cooperativas, toda la propiedad, documentos, cantidades no gastadas ni comprometidas de las asignaciones, partidas y otros fondos en poder y bajo la custodia de las agencias dedicadas a la administración de las leyes que se refieren en el apartado (c)(1) de este Artículo específicamente respecto a las cooperativas, se transfieren por la presente a la Corporación. Las transferencias de funciones, propiedad, bienes y fondos contempladas en la presente Ley no implican la transferencia de personal de ninguna de las agencias concernidas. Disponiéndose, sin embargo, que la Corporación y las agencias transferentes podrán, de mutuo acuerdo, coordinar y acordar el destaque o transferencia de personal especializado.

(4) Todo procedimiento adjudicativo formal, sea administrativo o judicial, que a la fecha de aprobación de esta Ley haya comenzado, concluirá en o bajo el control de la agencia que lo haya iniciado. Todo otro asunto para el cual a la fecha antes mencionada no se haya iniciado un procedimiento adjudicativo formal, sea administrativo o judicial, será remitido a la Corporación con un informe de status y recomendaciones para su ulterior trámite y atención por parte de la Corporación. El envío de dichos asuntos debe concluir en o antes de noventa (90) días luego de la aprobación de la presente Ley, salvo que el Presidente Ejecutivo y el jefe de la agencia correspondiente acuerden posponer la transferencia, cuya posposición no deberá exceder ciento ochenta (180) días.

(5) Todas aquellas leyes, reglamentos, órdenes, permisos, memorandos de entendimiento, cartas circulares y demás determinaciones administrativas vigentes al 1ro. de enero de 2001 aplicables a las Cooperativas emitidas por las agencias transferentes se mantendrán en vigor hasta tanto sean modificadas o dejadas sin efecto por la Corporación.

(d) A los fines del descargo de sus funciones y responsabilidades, la Corporación podrá ejercer todos los poderes, privilegios e inmunidades que para ello se requieran, incluyendo los siguientes:

(1) Realizar todos los actos y contratos que sean necesarios para la implantación de esta Ley y para ejercer los poderes que aquí se le confieren.

(2) Adoptar, alterar y usar un sello oficial del cual se tomará conocimiento judicial.

(3) Demandar y ser demandada.

(4) Adquirir, poseer, gravar, transferir y de cualquier otro modo administrar, utilizar y disponer de bienes muebles e inmuebles.

(5) Controlar y decidir el carácter y necesidad de todos sus gastos y la forma en que los mismos habrán de incurrirse, autorizarse y pagarse.

(6) Aceptar ayuda económica de cualquier naturaleza, incluyendo subsidios, donaciones, anticipos y otras transferencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Gobierno de los Estados Unidos de América y de sus agencias, departamentos, instrumentalidades, corporaciones públicas y subdivisiones políticas.

(7) Otorgar contratos de reaseguro por la totalidad o parte del riesgo asumido, debiendo retener el riesgo máximo conmensurable con sus recursos.

(8) Emitir obligaciones a corto y largo plazo para llevar a cabo sus fines corporativos, ofreciendo como garantías sus bienes, si fuere necesario.

(9) Actuar como síndico administrador o liquidador de cualquier Cooperativa Asegurada que esté sujeta a un procedimiento de sindicatura o liquidación.

(10) Funcionar como organismo fiscalizador de las Cooperativas. Disponiéndose que, con respecto al Banco Cooperativo, el Comisionado de Instituciones Financieras es la agencia fiscalizadora, con respecto a las cooperativas de seguros, el Comisionado de Seguros es la agencia fiscalizadora y, disponiéndose además, que con respecto a las Cooperativas que no son de ahorro y crédito, toda función de fiscalización efectuada por la Corporación será realizada en estrecha coordinación con la Oficina del Inspector de Cooperativas evitando en todo momento duplicidad de procesos y costos.

(11) Mediante decisión de su Junta de Directores:

(a) Adoptar reglas relativas a sus propios procedimientos y normas de trabajo.

(b) Instrumentar mediante reglamento cualquier disposición, definir con la aprobación de la Junta cualquier término no definido por ésta u otras leyes que sea su responsabilidad administrar; adoptar, aprobar, enmendar, o revocar aquellas reglas y reglamentos, órdenes, resoluciones y determinaciones necesarias al cumplimiento de esta Ley.

(c) Establecer mediante reglamento aquellos cargos que estime razonables por la atención de consultas, emisión de opiniones o determinaciones administrativas, otorgamiento de permisos autorizados por ley o reglamento, exámenes regulares y extraordinarios, o por la prestación de cualesquiera otros servicios similares en relación con cualesquiera de las leyes y reglamentos que administre o estén bajo su jurisdicción, en armonía con las guías establecidas en la Ley Núm. 15 de 20 de julio de 1990. Disponiéndose que, salvo el caso de los cargos por examen, en ningún caso los cargos excederán la cantidad de quinientos (500) dólares.

(d) Establecer mediante reglamento las normas bajo las cuales la Corporación exigirá a las Cooperativas de Ahorro y Crédito:

(i) Llevar sus cuentas, récords y registro.

(ii) Observar métodos y normas para determinar el valor de activos y pasivos.

(iii) Fijar el valor en el mercado de un activo.

(iv) Obtener los seguros contra daños u otros riesgos sobre su propiedad o propiedades.

(v) Mantener un seguro adecuado contra todos aquellos riesgos que crea necesario y apropiado para la protección de los socios, depositantes o el público.

(vi) Cargar contra sus beneficios no distribuidos, fondos de reserva o cuentas de capital, cualquier préstamo o parte de éste, cualquier activo o parte de éste, que constituya una posible pérdida para la entidad bajo examen.

(vii) Segregar cualquier porción de los beneficios futuros que fueren necesarios o convenientes hasta que queden restituidos en su totalidad dichas cuentas de capital y fondos de reserva.

(viii) Crear las reservas de valoraciones de activos que fueren necesarias o convenientes.

(ix) Requerir de toda persona cubierta por las disposiciones de esta Ley, que lleve y conserve aquellos récords y otros documentos que fueren necesarios para poner en vigor la misma.

(12) Atender, investigar y resolver las querellas presentadas ante la Corporación.

(13) Interponer cualesquiera remedios, acciones o procedimientos legales que fueran necesarios o convenientes para hacer efectivos los propósitos de ésta o cualquier otra ley o reglamento, cuyo cumplimiento o fiscalización le haya sido asignada, ya sea representado por sus abogados o por el Secretario de Justicia, previa solicitud a tales efectos.

(14) Hacer contratos o convenios con personas o instituciones públicas o privadas para llevar a cabo investigaciones, estudios o cualquier otro análisis para hacer efectivo los propósitos de esta Ley.

(15) Actuando a través del Presidente Ejecutivo, nombrar todo el personal que considere necesario para llevar a cabo sus funciones.

(16) Imponer multas administrativas por las violaciones a las leyes que administra o las reglas, reglamentos y órdenes aprobados o dictadas por la Corporación, según se señala en esta Ley.

(17) (i) Emitir, previa notificación y vista, órdenes para cesar y desistir y prescribir los términos que determine convenientes y beneficiosos al interés público. Cuando de acuerdo a la Corporación, exista una situación que amerite acción correctiva inmediata, por su naturaleza nociva o el grave daño que pueda causar a alguna Cooperativa, sus socios, sus depositantes, al Movimiento Cooperativo o personas en particular, ésta podrá emitir dicha orden de carácter sumario, obviando el requisito de notificación y celebración de la vista, hasta tanto se disponga en forma final cualquier procedimiento instituido de acuerdo con este Artículo. Al dictar la orden, la Corporación deberá notificarla inmediatamente a las partes concernidas, expresando las razones específicas que la fundamentan. La parte afectada con dicha orden, podrá solicitar la celebración de una vista dentro del término de diez (10) días a partir del recibo de la misma. Si no se solicitase la celebración de vista y la Corporación no la ordenase, la orden continuará en vigor hasta tanto sea modificada o dejada sin efecto por la Corporación. Si se solicitase u ordenase la celebración de una vista, la Corporación, luego de notificar y celebrar dicha vista, dando oportunidad a cada persona, según se especifica más adelante, de ser oído y presentar prueba a su favor, podrá modificar, prorrogar o dejar sin efecto la orden en cuestión, hasta tanto se disponga del asunto en forma final.

(ii) La Corporación podrá dejar sin efecto o modificar una orden si determina que las condiciones que le indujeron a dictarla han cambiado o que por alguna otra razón conviene al interés público así hacerlo.

(18) Recurrir al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico en solicitud de que se ponga en vigor cualquier orden de cesar y desistir emitida por la Corporación.

(19) (i) Llevar a cabo toda clase de estudios e investigaciones sobre asuntos que afectan a cualquier rama de Movimiento Cooperativo, para los cuales podrá requerir la información que sea necesaria, pertinente y esencial para lograr tales propósitos; podrá requerir o permitir a cualquier persona presentar una declaración por escrito, bajo juramento o en cualquier otra forma, según lo determine, relativa a los hechos y circunstancias concernientes al asunto que se va a estudiar o investigar. Disponiéndose que en el caso de estudios relativos a Cooperativas que no sean de Ahorro y Crédito serán realizados en estrecha coordinación con la Oficina del Inspector de Cooperativas, el Comisionado de Seguros y la Administración de Fomento Cooperativo evitando en todo momento duplicidad de procesos y costos.

(ii) Actuando a través del Presidente Ejecutivo y de otros oficiales designados por éste a tales fines, administrar juramentos y afirmaciones, citar testigos, compeler su comparecencia, recopilar evidencia y requerir la presentación de libros, papeles, correspondencia, apuntes, convenios u otros documentos o registros que estime relevantes o sustanciales a la investigación.

(iii) En caso de rebeldía por, o negativa a obedecer una citación expedida a cualquier persona, el Tribunal de Primera Instancia, a petición de la Corporación, podrá expedir una orden requiriendo a dicha persona que comparezca ante la Corporación o el oficial designado por ésta, para que produzca la evidencia documental solicitada, o para que aporte evidencia relativa al asunto en controversia, investigación o estudio. El incumplimiento de la orden judicial emitida a estos efectos, podrá ser castigado como desacato. El Tribunal de Primera Instancia atenderá con prioridad el curso y despacho de la petición de la Corporación.

(iv) Cuando una persona reclame que el cumplir con una citación o contestar cualquier controversia, investigación o estudio, o alegue que la evidencia que se le requiere podría exponerle a un proceso de naturaleza administrativa o a que se le destituya o se le

suspenda de su empleo, profesión u ocupación, la Corporación podrá garantizar previa consulta con el Secretario de Justicia, que la información a suministrarse no será utilizada en su contra en proceso alguno de naturaleza administrativa que pueda conllevar la destitución o suspensión de su empleo, profesión u ocupación. Cuando el reclamo sea que la información a suministrarse expone a la persona a un proceso de naturaleza criminal o civil, la Corporación podrá, con la aprobación del Secretario de Justicia, gestionar ante el Tribunal de Primera Instancia, una orden mediante la cual se obligue a la persona a testificar o suministrar la información requerida. Una vez expedida la orden, la persona no podrá negarse a colaborar en la investigación, pero su participación en la misma estará protegida conforme a los términos de la Ley

Núm. 27 de 8 de diciembre de 1990, conocida como "Ley de Procedimiento y Concesión de Inmunidad a Testigos".

(v) Excepto en los casos de órdenes sumarias contempladas en el Artículo 4 (d)(17)(i) de esta Ley, no podrá dictarse una orden sin que: (1) se de notificación previa adecuada a las personas que correspondan en su sitio de negocios, o donde se localicen personalmente o por correo certificado a su última dirección conocida; (2) se de a los interesados la oportunidad de ser oídos, y (3) se formulen determinaciones de hecho y conclusiones de derecho por escrito.

(20) Proveer apoyo financiero y gerencial directo a las Cooperativas, para lo cual podrá crear, patrocinar, estructurar, manejar y/o administrar fondos y programas de inversión, liquidez y educación.

(21) Realizar todos aquellos actos necesarios para el logro eficaz de los propósitos de esta Ley.

Artículo 5.-Junta de Directores

(a) Composición de la Junta. La Corporación será dirigida por una Junta integrada por los siguientes nueve (9) miembros: el Administrador de la Administración de Fomento Cooperativo, el Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico, el Secretario de Hacienda, el Inspector de Cooperativas, cuatro (4) personas en representación de las Cooperativas aseguradas y un (1) ciudadano particular en representación del interés público. La Junta será presidida por el Administrador de Fomento Cooperativo.

(b) Representación Gubernamental. Ninguno de los integrantes de la Junta de Directores podrá delegar sus funciones en otro funcionario ni podrá ocupar cargos directivos ni tener intereses económicos en ninguna institución financiera privada que no sea la tenencia de acciones y/o depósitos de una Cooperativa de Ahorro y Crédito asegurada o depósitos en otra institución depositaria.

(c) Representación de las Cooperativas. (1) A los fines de proveer al Movimiento Cooperativo de representación inmediata en la Junta de Directores, dentro de los treinta (30) días siguientes a la aprobación de esta Ley el Gobernador designará los primeros cinco (5) representantes de las Cooperativas Aseguradas como sigue:

A. Al menos dos (2) personas que sean principal funcionario ejecutivo de Cooperativas Aseguradas; y

B. Al menos dos (2) personas que sean miembros de juntas de directores de Cooperativas Aseguradas.

A los fines de escalonar los cargos de los representantes del Movimiento Cooperativo, un director que sea funcionario ejecutivo y un director que sea miembro de una junta de directores ocuparán sus cargos por dos (2) años; un director que sea funcionario ejecutivo y un director que sea miembro de una junta de directores ocuparán sus cargos por un (1) año; y el quinto director ocupará su cargo por tres (3) años. Los sucesores de los primeros

cinco representantes del Movimiento Cooperativo serán electos por las Cooperativas Aseguradas según se dispone en el inciso dos (2) que sigue a continuación.

(2) Los subsiguientes miembros de la Junta en representación de las Cooperativas Aseguradas serán seleccionados exclusivamente por las Cooperativas acogidas al Seguro de Acciones y Depósitos. Las Cooperativas Aseguradas elegirán como directores a por lo menos dos (2) personas que sean miembros de juntas de directores de dichas Cooperativas y por lo menos dos (2) personas que sean principal funcionario ejecutivo de cooperativas Aseguradas.

Disponiéndose, que en ningún caso podrá más de un representante de las Cooperativas corresponder a una misma Cooperativa. Los directores electos ocuparán sus cargos por el término de tres (3) años. Ningún director ocupará dicho cargo por más de tres (3) términos consecutivos. Los seleccionados no podrán ocupar cargos directivos ni ser empleados de ningún organismo cooperativo central. Tampoco podrán ser empleados de agencias gubernamentales relacionadas con el Movimiento Cooperativo, salvo por aquellos dispuestos en esta Ley.

(3) Cada Cooperativa tendrá un voto. Ningún síndico, administrador o director designado por alguna agencia gubernamental podrá actuar como representante de una Cooperativa en el proceso de selección de directores ni ocupar puesto alguno como director de la Corporación.

(4) El procedimiento de selección será el siguiente:

(i) Toda Cooperativa Asegurada podrá remitir a la Corporación sus nominaciones dentro del período de sesenta (60) días contados a partir del 30 de junio de cada año en el que corresponda elegir representantes del Movimiento Cooperativo a la Junta de Directores.

(ii) Inmediatamente termine el período de nominaciones, la Junta procederá a informar a las Cooperativas los nombres, así como los datos de preparación y experiencia de los candidatos nominados. Los candidatos nominados deberán contar al menos con un grado universitario de Bachillerato otorgado por una universidad reconocida por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y con por lo menos cinco (5) años de experiencia en cooperativas de ahorro y crédito, bien sea como líder voluntario o profesional. Además, los candidatos nominados han de ser principal funcionario ejecutivo o miembro de junta de directores de cooperativas que cuenten con una clasificación CAEL consolidada de tres (3) o menos. Para fines de esta sección, "Clasificación CAEL" significa la clasificación o categoría de una Cooperativa Asegurada al amparo del Sistema de Análisis Financiero adoptado por reglamento por la Corporación, considerando los parámetros objetivos financieros relativos a Capital ("C"), Activos ("A"), Economías ("E") y Liquidez ("L").

(iii) Las Cooperativas deberán, a través de su Junta de Directores, emitir su voto el cual deberá certificar el Secretario de ésta. El voto emitido por la Cooperativa podrá ser enviado en sobre sellado a la Corporación con anterioridad a la fecha de celebración de la asamblea, o entregado personalmente, también en sobre sellado, por el delegado de la Cooperativa en la misma asamblea.

(iv) Los votos emitidos serán abiertos y contados en la Asamblea Anual informativa por las personas que el Presidente de la Corporación designe.

(v) En caso de surgir una vacante esta será llenada siguiendo el mismo procedimiento mediante el cual se eligió la persona que ocupa dicho puesto.

(5) Durante el término de vigencia de sus cargos, los representantes del movimiento cooperativo tendrán que mantenerse en pleno cumplimiento con las cualificaciones requeridas en la presente Ley. De faltar a cualquiera de los requerimientos, dicho representante cesará en sus funciones y será reemplazado por una persona designada.

(6) En caso de surgir una vacante en los puestos de directorio en representación del movimiento cooperativo, se procederá a notificar inmediatamente a la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, quién tendrá la responsabilidad de establecer el mecanismo

de la consulta y selección entre las cooperativas aseguradas, ya sea representante de la Junta de Directores o funcionarios ejecutivos de cooperativas aseguradas; disponiéndose que la persona a ser designada deberá cumplir con los requisitos en esta Ley. El representante designado por el método establecido por la Liga de Cooperativas ocupará el cargo hasta el término que le quedada al provocarse la vacante.

(d) El miembro de la Junta en representación del interés público será designado conjuntamente por el voto de tres cuartas (3/4) partes del total de diez (10) miembros de la Junta de Directores en representación del sector gubernamental y del sector Cooperativo. El representante del interés público será nombrado por un término de tres (3) años y ocupará su cargo hasta que su sucesor sea nombrado y ocupe el cargo. Este deberá ser una persona de reconocida probidad moral y conocimiento e interés en el campo cooperativista y financiero. El representante del interés público no podrá ser empleado ni ocupar cargos directivos en ninguna institución financiera privada, en ninguna Cooperativa de Ahorro y Crédito asegurada, ni en ningún organismo cooperativo central. Tampoco podrá mantener intereses económicos en ninguna institución financiera pública o privada que compita con las Cooperativas de Ahorro y Crédito, pudiendo sí ser socio de una Cooperativa.

Los miembros de la Junta no recibirán compensación o remuneración alguna por el desempeño de sus funciones, pero a los que no sean funcionarios o empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se les podrá pagar una dieta y los gastos de viajes en que incurran por cada día de reunión de la Junta o por desempeñar cualquier función o encomienda que le delegue el Presidente de la Junta, de acuerdo al reglamento que al efecto adopte la Junta.

Serán elegibles, además, para se cobijados por las disposiciones del Artículo 12 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, adicionado por la Ley Núm. 9 de 26 de noviembre de 1975, según enmendada.

Artículo 6.-Reuniones y Quórum de la Junta

La Junta se reunirá en sesión ordinaria por lo menos cada tres (3) meses y podrá celebrar las reuniones extraordinarias que sean necesarias para atender los asuntos de la Corporación. Cinco (5) miembros de la Junta constituirán quórum y todos los acuerdos se tomarán por una mayoría de los miembros que constituyan quórum, excepto en lo que respecta a la adopción de reglamentos que se regirá por lo dispuesto en el inciso (a) del Artículo 7 de esta Ley.

Artículo 7.-Funciones y Facultades de la Junta

La Junta tendrá las siguientes facultades y poderes, además de cualesquiera otras establecidas en esta Ley:

(a) (i) Aprobar las reglas y reglamentos para la aplicación de esta Ley para regir los asuntos de la Corporación. Estas reglas y reglamentos deberán aprobarse por el voto de dos terceras (2/3) partes del total de los miembros de la Junta en una reunión extraordinaria de la Junta especialmente convocada para su consideración. Los reglamentos de la Corporación, excepto los de funcionamiento interno de la Junta, se adoptarán de conformidad a la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

(ii) Antes de que la Junta de Directores de la Corporación apruebe cualesquiera de los reglamentos dispuestos en esta Ley o en cualesquiera otras leyes bajo su administración y jurisdicción, que no sean los de funcionamiento interno de la Corporación, el Presidente Ejecutivo los someterá al Comisionado de Instituciones Financieras y a la Junta

Financiera para que éstos presenten sus comentarios y recomendaciones en un plazo de treinta (30) días.

(iii) Las reglas que en su momento adopte la Corporación al amparo de esta Ley o de cualesquiera otras leyes bajo su administración y jurisdicción, que no sean las de funcionamiento interno de la Corporación, no serán menos restrictivas, ni proveerán menor protección a los consumidores y usuarios de servicios y productos financieros, que las reglas adoptadas bajo esas mismas leyes según aplicadas por el Comisionado de Instituciones Financieras.

(iv) Excepto por la adopción de reglas bajo la presente Ley, bajo la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, conocida como “Ley de Sociedades cooperativas de Ahorro y Crédito de Puerto Rico”, y bajo la Ley Núm. 50 de 4 de agosto de 1994, conocida como “Ley General de Sociedades Cooperativas”, la Corporación se abstendrá, por un período transicional de dos (2) años contados a partir de la aprobación de la presente Ley, de adoptar nuevas reglas bajo aquellas otras leyes identificadas en el Artículo 4 (c) (1) de esta Ley. Durante este período transicional, la Corporación aplicará e implantará respecto de las Cooperativas, sus afiliadas y los negocios y operaciones de éstas, las normas y reglamentos adoptados por el Comisionado de Instituciones Financieras tal y como son aplicables a los demás participantes del mercado financiero.

(v) Entre los asuntos que deberán adoptarse mediante reglamentos al amparo de este inciso se incluyen los siguientes:

(a) Establecer el sistema de análisis financiero de la Corporación, el cual ha de utilizar, entre otras cosas, indicadores estadísticos o financieros que alerten a la Corporación sobre problemas que puedan culminar en la insolvencia de las Cooperativas.

(b) Establecer los requisitos de políticas para el manejo de riesgo y debida administración financiera de las Cooperativas Aseguradas.

(c) Fijar los tipos tarifarios, cuotas, cargos y primas especiales y regulares que pagarán las Cooperativas que se acojan al Seguro de Acciones y Depósitos, así como los mecanismos para el cómputo, imposición y pago de los mismos por las Cooperativas Aseguradas.

(d) Establecer los parámetros y mecanismos correspondientes a los planes progresivos de acción correctiva a requerirse a Cooperativas Aseguradas que muestren debilidades o riesgos de pérdidas.

(e) Establecer la reglamentación y los mecanismos de supervisión para velar y proteger los derechos y prerrogativas de los socios de toda Cooperativa, incluyendo la protección de sus intereses económicos, su derecho a estar bien informados y previniendo contra prácticas engañosas y fraudulentas en la oferta, venta, compra y toda otra transacción en o relativa a las acciones de Cooperativas.

(f) Establecer los parámetros y mecanismos correspondientes al proceso de auto reglamentación de los procesos rectores de las Cooperativas, cuyos asuntos no presenten o impliquen riesgos relativos a la integridad económica, financiera, jurídica o moral de dichas instituciones o de sus socios.

(g) Establecer las fechas y la frecuencia con que deberán rendirse estados financieros, los formularios a usarse, las personas obligadas a certificarlos, la información que se incluirá o acompañará y cualquier otro dato o información conveniente para cumplir con los propósitos de esta Ley. Disponiéndose que toda función de fiscalización efectuada por la Corporación respecto de cooperativas que no sean de ahorro y crédito será realizada en estrecha coordinación con la Oficina del Inspector de Cooperativas evitando en todo momento duplicidad de procesos y costos.

(b) Establecer la política de inversiones de la Corporación de conformidad a las disposiciones y limitaciones establecidas en esta Ley.

- (c) Realizar estudios actuariales e investigaciones y recopilar datos y estadísticas relacionados con el seguro que ofrezca.
- (d) Evaluar y tomar la acción que corresponda al finalizar cada año económico, respecto al informe anual de la Corporación.
- (e) Adoptar las medidas preventivas o remediativas que sean necesarias para reducir el potencial de pérdidas de las Cooperativas aseguradas y minimizar las pérdidas de la Corporación, incluyendo la concesión de ayuda económica en efectivo o mediante el intercambio de obligaciones financieras. Cuando se recurra al intercambio de obligaciones, aquéllas emitidas por la Corporación se considerarán como capital para la Cooperativa Asegurada y se pagarán intereses sobre las mismas, según se acuerde entre las partes.
- (f) Asegurarse que la Corporación cumpla en forma efectiva su función de velar por la solvencia económica de las Cooperativas.
- (g) Solicitar la intervención, asesoramiento u opinión del Secretario de Justicia, cuando así lo entienda necesario.

Artículo 8.-Ética Pública e Inmunidad

Los miembros de la Junta y el Presidente Ejecutivo estarán sujetos a las disposiciones de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, conocida como “Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. En el caso de los integrantes de la Junta de Directores en representación del Movimiento cooperativo, los mismos se abstendrán de discutir, analizar, considerar, evaluar y de cualquier otra forma participar en asuntos pertinentes a las instituciones en las que laboran como funcionarios ejecutivos o miembros de cuerpos directivos.

Ningún miembro de la Junta ni el Presidente Ejecutivo revelará o usará información o documentos adquiridos durante el desempeño de su función para propósitos ajenos al mismo. Todo miembro de la Junta y el Presidente Ejecutivo mantendrá la confidencialidad de aquellos asuntos relacionados con su función, a menos que reciba una solicitud que requiera la divulgación de algún asunto y que ello esté permitido por autoridad competente.

Ni la Junta de Directores de la Corporación, ni sus directores o el Presidente ejecutivo individualmente, incurrirán en responsabilidad económica por cualquier acción tomada en el desempeño de sus deberes y poderes bajo esta Ley, siempre y cuando no actúen intencionalmente, ilegalmente, y a sabiendas de que pueden ocasionar algún daño o para beneficio propio o de un tercero.

Artículo 9.-Presidente Ejecutivo

El Presidente Ejecutivo de la Corporación será nombrado por el voto de dos terceras (2/3) partes del total de los miembros de la Junta, con la aprobación del Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Este será el Principal Funcionario ejecutivo de la corporación, ejercerá aquellas funciones y facultades que establece la ley y que le delegue la Junta y devengará el salario que ésta autorice. El Presidente Ejecutivo tendrá, entre otros, los siguientes poderes y deberes:

- (a) Establecer, con la aprobación de la Junta, la organización interna de la corporación y los sistemas que sean necesarios para su adecuado funcionamiento y operación.
- (b) Ejecutar todas las acciones administrativas y gerenciales que sean necesarias para la implantación de esta Ley y de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, así como los reglamentos que se adopten en virtud de las mismas.
- (c) Nombrar el personal que sea necesario para llevar a cabo los fines y propósitos de esta Ley, de acuerdo a las clases de puestos y plan de clasificación que adopte la Junta. La Corporación estará exenta de las disposiciones de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de

1975, según enmendada, conocida como “Ley de Personal del Servicio Público”, pero la Junta podrá proveer para que su personal pueda acogerse a los beneficios de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como “Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades”.

(d) Contratar los servicios técnicos y profesionales que sean necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta Ley con sujeción a las normas y reglamentos que apruebe la Junta.

(e) Preparar el presupuesto de gastos de la Corporación y someterlo a la Junta para su aprobación.

(f) Establecer, con el asesoramiento del Secretario de Hacienda y sujeto a las aprobación de la Junta, un sistema de contabilidad completo y detallado para el registro y control de todos los ingresos y desembolsos de la Corporación y para el adecuado control de todas sus operaciones y transacciones fiscales.

(g) Adoptar, previa aprobación de la Junta, las normas para el uso, control y conservación de la propiedad de la Corporación.

(h) Otorgar contratos y convenios o realizar transacciones con entidades públicas o privadas para los fines y propósitos de esta Ley, previa aprobación de la Junta.

(i) Implantar y operar el sistema de análisis financiero que adopte la Junta al amparo del Artículo 7 (a) (i) de esta Ley.

(j) Invertir los recursos de la Corporación en cualesquiera actividades, bienes o fines consonos con los propósitos de esta Ley, excepto en acciones comunes o preferidas o en cualquier otro valor que represente un interés patrimonial de una empresa o entidad que no esté relacionada con las Cooperativas o Federaciones.

(k) Ofrecer a las Cooperativas aseguradas ayuda técnica y adiestramientos sobre materias administrativas y gerenciales, así como cualquier asesoramiento que considere necesario para que cumplan con los requisitos que se les impongan como condición para acogerse al seguro de acciones y depósitos o para permanecer aseguradas por la Corporación.

(l) Evaluar la situación financiera de las Cooperativas aseguradas con el propósito de poder anticipar pérdidas potenciales y requerirles la presentación de informes según la forma, términos, formularios y contenido que se establezca por reglamento.

(m) Requerir la prestación de fianzas de conformidad con las disposiciones de ley y autorizar el pago de las primas de las fianzas que requiera.

(n) Determinar, acorde con las reglas adoptadas por la Junta y las dispuestas por esta Ley y sus reglamentos, la elegibilidad de cualquier Cooperativa para acogerse al seguro de acciones y depósitos o para continuar con entidad asegurada, incluyendo los casos de fusión, adquisición de activo y pasivo o consolidación de Cooperativas.

(o) Considerar, aprobar o desaprobar, de conformidad con la reglamentación vigente, toda solicitud de autorización, permiso o licencia requerida a las Cooperativas al amparo de las leyes aplicables.

(p) Hacer efectiva la garantía del Seguro de Acciones y Depósitos, de acuerdo a la reglamentación que al efecto se adopte.

(q) Nombrar los miembros de la Junta de Síndicos, en los casos de liquidación de cooperativas de Ahorro y Crédito que, de acuerdo a la Ley, la corporación sea el síndico liquidador.

(r) Realizar todas aquellas funciones y encomiendas que le delegue la Junta.

(s) Atender las consultas, solicitudes de opiniones y determinaciones administrativas y/o querellas que se le presenten. En tales casos, la decisión del Presidente ejecutivo podrá ser revisada por la Junta de Directores. La decisión final de la Junta de Directores podrá ser revisada judicialmente ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Artículo 10.-Cubierta Mandatoria

Toda cooperativa de Ahorro y Crédito que esté organizada y operando como tal a la fecha de vigencia de esta Ley deberá mantenerse acogida al seguro de acciones y depósitos de la Corporación. No obstante, aquellas Cooperativas de Ahorro y Crédito que, a la fecha de vigencia de esta Ley, estén acogidas al seguro de acciones y depósitos de la National Credit Union Administration tendrán la opción de continuar bajo el seguro de dicha entidad o de acogerse al seguro de acciones y depósitos que dispone esta Ley, sujeto en este último caso a que cumplan con los requisitos establecidos por la Corporación.

Toda Cooperativa de Ahorro y Crédito o Federación que se organice después de la fecha de vigencia de esta Ley estará obligada a acogerse al seguro de acciones y depósitos antes de comenzar operaciones, según los requisitos que se establezcan por reglamento.

Artículo 11.-Deberes y Obligaciones de las Cooperativas

(a) Deberes y Obligaciones de toda Cooperativa.

(1) Respeto a los principios Cooperativistas.

(2) Cumplimiento con las disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

(3) Cumplimiento con la reglamentación local y federal aplicable a sus negocios, servicios y operaciones.

(4) Evitar prácticas fraudulentas o engañosas en sus operaciones y en el ofrecimiento, suscripción, emisión y venta de acciones. La Corporación definirá mediante reglamento aquellas prácticas específicas que resulten fraudulentas o engañosas, para lo cual la Corporación tomará en consideración, entre otras, las disposiciones de la Ley Núm. 60 de 18 de junio de 1963, según enmendada, también conocida como "Ley Uniforme de Valores". Respecto de dichas normas, toda Cooperativa será considerada como una Cooperativa Asegurada sujeta a la jurisdicción primaria y autoridad de la Corporación.

(b) Deberes y Obligaciones de las Cooperativas Aseguradas.

Las Cooperativas Aseguradas por la Corporación deberán cumplir con los siguientes deberes y obligaciones, en adición a cualesquiera otros impuestos por esta Ley:

(1) Proveer protección y adquirir seguros contra todo tipo de pérdidas asegurables por los límites máximos que las circunstancias particulares de cada Cooperativa requiera y según disponga la Corporación. Dichos seguros deberán incluir entre otros, seguros de propiedad, responsabilidad legal, fianzas de fidelidad, seguros de responsabilidad legal para los miembros de la Junta y cualquier otro tipo de cubierta que establezca la Corporación mediante reglamento. Estos seguros se suscribirán utilizando los tipos de pólizas y los límites que la Corporación determine.

(2) Mantener las reservas regulares y especiales requeridas por la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito.

(3) Mantener las reservas especiales que la Corporación exija por reglamento u orden específica, cuando así se justifique para proteger los intereses de los socios de las Cooperativas Aseguradas y para reducir al mínimo posible las pérdidas potenciales de la Corporación.

(4) Pagar y mantener el capital, las primas regulares y las primas especiales de seguro que se disponen en esta Ley.

(5) Cumplir rigurosamente con los requisitos, obligaciones y disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, con las leyes y reglamentos aplicables a la organización y operación de las Cooperativas en Puerto Rico, incluyendo las normas de la Corporación que estén relacionadas con su función de velar por la solvencia de las Cooperativas Aseguradas.

(6) Notificación de garantías y anuncios al público. Toda Cooperativa Asegurada deberá mantener en un lugar visible de cada uno de sus establecimientos de negocios un aviso claramente legible notificando al público que las cuentas de sus socios y depositantes están aseguradas por la Corporación. Todo anuncio de promoción o publicidad deberá llevar el logo de la Cooperativa Asegurada e incluir información a los efectos de que las

cuentas de sus socios y depositantes están aseguradas por la Corporación. A menos que la Corporación lo exija expresamente, cualquier Cooperativa Asegurada podrá obviar este último requisito cuando se trate de anuncios de promoción o publicidad que no estén relacionados con las cuentas de los socios y depositantes o cuando no sea práctico incluir tal información. La corporación adoptará unas guías para orientar a las Cooperativas Aseguradas sobre la manera de exhibir tales anuncios, el contenido de los mismos y la forma más adecuada y conveniente de usarlos.

(7) Sistema de seguridad. Toda Cooperativa Asegurada establecerá y mantendrá un sistema de seguridad adecuado para la protección de la propiedad e intereses de la misma. La Corporación promulgará reglas estableciendo las normas mínimas de seguridad que deberán cumplir las Cooperativas Aseguradas en lo que respecta a la instalación, mantenimiento y operación de mecanismos y controles de seguridad. Tales reglamentos dispondrán el término del cual las Cooperativas Aseguradas deberán cumplir con las normas de seguridad que adopte la Corporación, así como el término para que éstas le rindan informes periódicos con relación a la instalación, mantenimiento y operación de tales mecanismos y sistemas de seguridad.

(8) Sistema de manejo de riesgo financiero. Toda Cooperativa Asegurada adoptará y mantendrá un sistema de medición y manejo de riesgo financiero acorde con los parámetros que defina por reglamento la Corporación.

(9) Capacitación. Toda Cooperativa Asegurada adoptará programas de educación continuada y capacitación acorde con los parámetros que defina por reglamento la Corporación. Dicha reglamentación y los programas de educación que adopten las Cooperativas a su amparo deberán asegurar y constatar que los miembros de los cuerpos directivos, comités y gerencia de la Cooperativa Asegurada cuentan con los conocimientos técnicos, financieros y gerenciales cónsonos con los cargos que ocupan.

Artículo 12.-Límite del Seguro de Acciones y Depósitos

El Seguro de Acciones y Depósitos de la Corporación deberá proveer para garantizar, contra el riesgo de pérdida por insolvencia, las acciones y depósitos de los socios y depositantes de las Cooperativas hasta el límite máximo de cien mil (\$100,000.00) dólares. Disponiéndose, sin embargo, que con respecto al Banco Cooperativo de Puerto Rico, el seguro de la Corporación podrá garantizar por riesgo de insolvencia económica, únicamente sus depósitos. En vista de la naturaleza especial del Banco Cooperativo, la Junta de la Corporación adoptará mediante reglamento las normas que regirán la cubierta aplicable a los depósitos del Banco así como el cómputo de la prima correspondiente, evitando la imposición múltiple de primas sobre depósitos que provengan de las Cooperativas Aseguradas.

Luego de los estudios actuariales correspondientes y con la aprobación previa de dos terceras (2/3) partes de la Junta de Directores, la Corporación podrá aumentar el límite máximo de seguro tomando en cuenta los siguientes factores:

1. Capacidad financiera de la Corporación para responder por el incremento en cubierta.
2. Condición financiera de las Cooperativas Aseguradas.
3. Límites de seguro vigentes bajo los programas federales de seguro de depósito y/o acciones.

En adición a las cubiertas básicas equiparadas a los programas federales, la Corporación podrá decretar cubiertas suplementarias, adicionales o especiales para ciertos tipos de depósitos y/o acciones, para las cuales se definirán, de ser necesario, Primas Suplementarias.

Todo aumento en cubierta, bien sea ésta general, suplementaria, adicional o especial, deberá estar fundamentado y apoyado por estudios actuariales y financieros que demuestren la capacidad de la Corporación para afrontar las cubiertas ampliadas. En todo caso en que se decreta un aumento en la cantidad máxima combinada de acciones y depósitos asegurables, la corporación deberá establecer los procedimientos pertinentes para que puedan hacerse los ajustes que sean necesarios en las primas del seguro.

Artículo 13.-Estados Financieros de Cooperativa Aseguradas

Toda Cooperativa Asegurada deberá presentar a la Corporación al 30 de junio de cada año un estado de situación que refleje su condición financiera e indicará el balance de las cuentas de acciones y depósitos de los socios de acuerdo a las normas que establezca la Corporación. Esos balances deberán coincidir con los del informe que se requiere en esta Ley para fines de la determinación de la prima a pagar por la Cooperativa.

Acorde con lo dispuesto en el Artículo 7 de esta Ley, la Corporación establecerá por reglamento las fechas y la frecuencia con que deberán rendirse esos estados financieros, los formularios a usarse, las personas obligadas a certificarlos, la información que se incluirá o acompañará y cualquier otro dato o información conveniente para cumplir con los propósitos de esta Ley.

La Corporación podrá requerir a cualquier Cooperativa Asegurada que le rinda otros informes financieros o de otra índole para conocer toda la situación de la misma y para determinar el riesgo de pérdidas financieras que ésta pueda representar para el seguro de acciones y depósitos. También podrá exigirles que publiquen sus estados anuales de situación financiera en la forma que se considere más conveniente para el interés público.

Artículo 14.-Determinación del Monto de la Prima del Seguro

La prima por concepto del seguro de acciones y depósitos que pagará cada Cooperativa Asegurada se computará tomando como base su total de acciones y depósitos al 30 de junio del año anterior a aquél para el cual habrá de pagarse la misma.

Al comenzar el año al que corresponda la prima y, por lo menos quince (15) días antes de la fecha límite de pago de prima que se establece en esta Ley, cada Cooperativa Asegurada deberá someter a la corporación un estado certificado de la cantidad de acciones y depósitos de sus socios y depositantes a la fecha antes indicada para que la Corporación determine el monto total de la prima de seguro que deberá pagar. A los fines de este Artículo, para cumplir con el requisito de certificación será suficiente que dicho estado sea firmado por el Presidente de la Junta de Directores de la Cooperativa Asegurada o por cualquier otro miembro de la misma debidamente autorizado por dicha Junta, que pueda dar fe de que las cantidades expresadas en el informe son ciertas, correctas y determinadas de acuerdo con esta Ley y los reglamentos aplicables. Las Cooperativas Aseguradas que sometan a la Corporación el estado certificado que se requiere en esta Ley en el término antes establecido no tendrán que radicar el estado de acciones y depósitos antes descritos.

Las Cooperativas que sean admitidas por primera vez al seguro de acciones y depósitos, deberán estimar las acciones y depósitos para los meses que correspondan a su primer año de operaciones y pagar una prima provisional a base de dicho estimado, la cual será reajustada tomando como base las cifras reales al 30 de junio del año en que comience las operaciones.

En cualquier año en que entre en efecto un aumento en el límite máximo del seguro de acciones y depósitos, según se dispone en esta Ley, la Corporación podrá cobrar una prima provisional adicional por concepto del incremento en acciones y depósitos que se anticipe como resultado del referido aumento. Al terminar dicho año, se harán los ajustes que correspondan en dicha prima provisional, tomando como base las cifras reales del aumento en acciones y depósitos para el año, atribuible al aumento en el límite máximo del seguro.

Artículo 15.-Fecha de Pago de la Prima del Seguro

La prima del seguro de acciones y depósitos vencerá el 1ro. de julio de cada año y deberá pagarse no más tarde del último día de dicho mes. Las Cooperativas Aseguradas que al vencimiento de esta última fecha no tengan disponibles las cifras certificadas del total de acciones y depósitos asegurados pagarán una prima provisional, cuyo monto se determinará tomando como base el balance de acciones y depósitos del último informe trimestral sometido o de cualquier otro informe de que disponga la Corporación. Esta prima provisional será reajustada tan pronto la Cooperativa Asegurada obtenga y someta sus cifras finales, debiéndose hacer también, en ese momento, cualesquiera ajustes que corresponda en los pagos de primas.

La Corporación podrá imponer el pago de recargos, intereses y penalidades a aquellas Cooperativas Aseguradas que no paguen las primas dentro del término aquí establecido. Asimismo, podrá iniciar las acciones administrativas o judiciales que estime necesarias y convenientes para exigir a cualquier Cooperativa Asegurada el pago de cualquier cantidad vencida y no pagada por concepto de primas del Seguro de Acciones y Depósitos.

Artículo 16.-Omisión de Rendir Estados Certificados de Acciones y Depósitos

Estará sujeta a perder todos los derechos y beneficios garantizados por esta Ley a que la corporación le revoque la autorización para hacer negocios como una entidad Cooperativa y ordene su liquidación, toda Cooperativa Asegurada que:

- (a) Rehúse radicar los estados certificados sobre el total de acciones y depósitos que se requieren en esta Ley;
- (b) Se niegue a pagar las primas del seguro, las acciones de capital o las primas especiales que le requieren esta Ley y sus reglamentos, o
- (c) Se niegue a corregir cualquier error u omisión en dichos estados certificados o se niegue a pagar las sumas que adeuden por concepto de primas anuales, especiales, recargos e intereses, o se nieguen a depositar en la Corporación la aportación de capital que se requiere en esta Ley o a pagar cualquier multa administrativa que se le haya impuesto.

Cuando una Cooperativa Asegurada incurra en cualesquiera de las faltas antes establecidas, la Corporación deberá hacerle un requerimiento para que subsane su falta dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de tal requerimiento. De no subsanarla en dicho término, la Corporación notificará a la Junta de Directores de la Cooperativa informándole sobre la falta incurrida y apercibiéndolo de que impondrá a la Cooperativa Asegurada las sanciones establecidas en esta Ley.

Si después de este procedimiento, el cual podrá ser prorrogado por un término que no excederá de sesenta (60) días, la Cooperativa Asegurada persiste en cualesquiera de las faltas señaladas en los incisos (a), (b) y (c) de este Artículo, la Corporación podrá imponerle las sanciones que se establecen en el primer párrafo de este Artículo. Esta decisión se notificará de inmediato a la Junta de Directores de la Cooperativa Asegurada, con expresión de los hechos y fundamentos que sirven de base a la misma.

La Corporación tiene la responsabilidad de adoptar y ejecutar las medidas que sean necesarias para salvaguardar las garantías que esta Ley provee para los socios y depositantes de la Cooperativas Aseguradas, en todo caso en que se revoque la autorización para hacer negocios como entidad Cooperativa o en los casos en que se proceda con la liquidación de una Cooperativa Asegurada.

Artículo 17.-Obligación de Mantener Récor ds

Toda Cooperativa Asegurada mantendrá sus récor ds en forma tal que se facilite la verificación de la corrección de los estados de situación, estados auditados, depósitos y acciones, préstamos, primas de seguros y cualesquiera otros datos estadísticos y financieros que la Corporación estime necesario a los fines de esta Ley. La Corporación podrá requerir a las Cooperativas Aseguradas que mantengan los sistemas y procedimientos y que utilicen los formularios y documentos uniformes que se dispongan para la conservación de tales récor ds o documentos.

La Corporación podrá autorizar a las Cooperativas Aseguradas a que dispongan de dichos récor ds después de los cinco (5) años de haberse preparado, archivado o efectuado el informe, estado o pago de cualquier suma de capital, prima regular o extraordinaria o de haberse hecho cualquier ajuste a tales pagos o cargos. No obstante lo anteriormente dispuesto, éstos se tendrán que conservar hasta la adjudicación final de cualquier controversia cuando existan diferencias entre una Cooperativa Asegurada y la Corporación sobre la cantidad de cualquier depósito o ajuste al mismo, sobre cualquier cargo por primas o sobre la situación financiera de la Cooperativa Asegurada. También deberán conservarse cuando la situación financiera de la Cooperativa Asegurada pueda requerir que la Corporación pague alguna cantidad al amparo del seguro de acciones y depósitos.

Artículo 18.-Examen de Cooperativas Aseguradas

La Corporación estará obligada a realizar una auditoría o examen de toda Cooperativa que solicite acogerse al seguro de acciones y depósitos. Además, podrá realizar exámenes o auditorías regulares de las Cooperativas Aseguradas y hacer exámenes o auditorías extraordinarias cuando a su juicio sea necesario para determinar la condición de tales Cooperativas para propósitos del seguro de acciones y depósitos o cuando los indicadores financieros de una Cooperativa Asegurada sugieran que está en peligro de insolvencia.

Los auditores o examinadores de la Corporación tendrán facultad para examinar todos los asuntos que consideren pertinentes y deberán someter a la Corporación un informe completo y detallado de la condición de la Cooperativa Asegurada. Estos exámenes o auditorías se podrán realizar en coordinación con lo que establece la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada. Los exámenes o auditorías requeridos por este Artículo no se podrán sustituir con informes realizados por auditores independientes, ordenados y contratados por la Cooperativa.

Asimismo, la Corporación podrá investigar y examinar todas las reclamaciones relacionadas con las cuentas aseguradas de los socios de las Cooperativas. A esos fines, designará agentes de reclamaciones que tendrán facultad para citar testigos y obligarlos a comparecer ante ellos, tomar declaraciones y juramentos, recibir y examinar cualesquiera libros, récor ds, archivos y documentos relacionados con las cuentas aseguradas y para requerir la prestación de testimonio o la producción de documentos. Las citaciones expedidas por los agentes de reclamaciones serán suscritas por éstos y llevarán el sello de la Corporación, pudiendo ser notificadas por cualquier método seguro y fehaciente en cualquier parte del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tales como entrega personal, envío por correo o publicación en un diario de circulación general.

Cuando una persona se niegue a cumplir con una citación de un agente de reclamaciones requiriéndole que comparezca a declarar o a presentar cualquier documento relacionado con un asunto bajo su investigación, éste podrá, en consulta con el Secretario de Justicia, solicitar el auxilio de Sala Superior del Tribunal de Primera Instancia del lugar donde ubica la oficina principal de la Cooperativa Aseguradas de que se trate o donde resida o realice negocios el testigo en cuestión y el tribunal podrá ordenar, bajo apercibimiento de desacato, que la persona referida comparezca a declarar o a presentar los documentos requeridos.

Los examinadores designados por la Corporación para investigar o auditar las Cooperativas Aseguradas tendrán también las mismas facultades que los agentes de reclamaciones para citar testigos y obligarlos a comparecer ante ellos, tomar juramentos y requerir la presentación de cualesquiera libros, archivos, récords o documentos relacionados con los asuntos bajo su investigación y examen. Asimismo, podrán solicitar, en consulta con el Secretario de Justicia, el auxilio de la Sala Superior del Tribunal de Primera Instancia del lugar donde está ubicada la oficina principal de la Cooperativa Asegurada, o donde el testigo resida o haga negocios, cuando éste se niegue a comparecer o a presentar los documentos requeridos, para obligar dicha comparecencia, la declaración del testigo o la presentación de documentos.

La Corporación podrá requerir y usar para sus fines y propósitos legales cualquier informe hecho por o para cualquier agencia, comisión, junta o autoridad que tuviera facultad para supervisar a las Cooperativas Aseguradas.

La Corporación podrá ejercer las funciones de examen descritas en este Artículo respecto a las Cooperativas que no son de Ahorro y Crédito siempre y cuando dichas funciones se efectúen en estrecha coordinación con la Oficina del Inspector de Cooperativas evitando en todo momento duplicidad de procesos y costos.

Artículo 19.-Suspensión y Remoción de Directores y funcionarios ejecutivos

(a) Cuando se tenga motivos fundados para creer que cualquier miembro de la Junta de Directores, miembro de comité, principal funcionario ejecutivo u otro empleado de una Cooperativa Asegurada ha cometido una violación o está violando cualquier ley en relación con dicha entidad, o ha seguido prácticas inadecuadas en el manejo del negocio, la Corporación formulará cargos a dicho miembro de la Junta de Directores, miembro de comité, principal funcionario ejecutivo u otro empleado y le requerirá que comparezca ante el representante designado por la Corporación, dentro del término y el procedimiento establecido mediante reglamento, a mostrar causa por la cual no deba ser destituido. En todo caso de formulación de cargos al principal funcionario ejecutivo, se expedirá una orden contra la Junta de Directores para que ésta muestre causa por la cual no se determine que ha incumplido en su función de supervisión de la gerencia.

(b) Copia de la notificación de cargos será enviada por correo certificado con acuse de recibo a cada miembro de la Junta de Directores de la Cooperativa Asegurada afectada.

(c) Si la Corporación determinare, después de concederle a la persona imputada una oportunidad razonable para ser oída y presentar prueba en apoyo de su causa, que ésta ha violado cualquier ley relacionada con dicha Cooperativa o ha seguido prácticas inadecuadas en el manejo de los negocios de dicha institución, podrá ordenar que dicha persona sea destituida de su cargo.

(d) La Corporación notificará copia de la orden de destitución a la persona afectada y otra copia a la entidad de la cual ésta es miembro de la Junta de Directores, miembro de comité, principal funcionario ejecutivo o empleado para ser sometida inmediatamente a la junta directiva de dicha entidad. En ese caso, dicho miembro de la Junta de Directores, miembro de comité, principal funcionario ejecutivo u otro empleado, cesará de ocupar su cargo o empleo inmediatamente al recibo de la notificación de la orden de la Corporación.

(e) La orden y las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho en que se fundamente la misma no se harán públicas, ni se divulgarán a nadie, con excepción de la persona imputada y los directores de la Cooperativa concernida, salvo cuando por determinación de dos terceras (2/3) partes de la Junta de Directores de la Corporación se determine que tal divulgación resulta conveniente al mejor interés del Movimiento Cooperativo, o en el contexto de una revisión judicial promovida según dispuesto en esta Ley.

(f) Ningún miembro de la Junta de Directores, miembro de comité, principal funcionario ejecutivo u otro empleado que hubiere sido destituido de su cargo según lo dispuesto en este Artículo, podrá participar posteriormente en modo alguno en la administración o dirección de cualquier Cooperativa sin la previa autorización de la Corporación.

Artículo 20.-Sindicatura, Fusión, Consolidación, Compra de Activos y Pasivos o Liquidación de Cooperativas Aseguradas en Caso de Insolvencia o Riesgo de Insolvencia

La Corporación podrá emitir una orden provisional para colocar a una Cooperativa Asegurada bajo su administración cuando, después de una auditoría, investigación, examen o inspección se demuestre a juicio de la Corporación, que la Cooperativa se encuentra en una o más de las situaciones siguientes:

1. Carece de una situación económica y financiera sólida.
2. No cuenta con controles internos efectivos para la administración de sus asuntos.
3. No tiene reservas adecuadas.
4. Su contabilidad no esté al día, ni en forma razonablemente correcta para continuar operaciones.
5. Se está administrando de forma tal que los socios, las personas o entidades con depósitos en la misma, están en peligro de ser defraudados.

No será necesario celebrar una vista antes de emitir la orden cuando a juicio de la Corporación la situación de la Cooperativa sea una de emergencia, en cuyo caso la Corporación tomará posesión y control inmediato de la administración de la Cooperativa según el reglamento que para estos fines adopte la misma.

En estos casos, deberá celebrarse una vista administrativa dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación de la orden para determinar si la misma se hace permanente o se revoca. En situaciones donde no existe una emergencia, la vista se llevará a cabo previo a la emisión de la orden. En cualquiera de los casos, la vista administrativa se llevará a cabo de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

Después que se lleve a cabo la fusión, consolidación, o venta de activos y pasivos de una Cooperativa Asegurada y que la Corporación cumpla con las prestaciones acordadas, las cuentas aseguradas de los socios y depositantes de la Cooperativa adquirida se convertirán en acciones y depósitos en la institución adquiriente.

No obstante lo anterior, a juicio de la Corporación, ésta podrá emitir una orden para que la Cooperativa muestre causa por la cual no debe procederse con la liquidación, fusión, consolidación, o venta de activo o pasivo de cualquier Cooperativa Asegurada cuando coincidan las siguientes circunstancias:

1. Exista una emergencia que requiera una acción rápida con respecto a tal Cooperativa Asegurada.
2. No haya otra alternativa razonable que pueda asegurar la solvencia de la Cooperativa Asegurada.
3. Se determina que la fusión, consolidación o compra de la Cooperativa de que se trate es lo que mejor beneficia al interés público.
4. La fusión, consolidación o compra es la alternativa de menor costo para la Corporación.

No será necesario celebrar una vista antes de emitir la orden cuando a juicio de la Corporación la situación de la Cooperativa sea una de emergencia, en cuyo caso la Corporación tomará posesión y control inmediato de la administración de la Cooperativa según el reglamento que para estos fines adopte la misma.

En estos casos, deberá celebrarse una vista administrativa dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación de la orden para determinar si la misma se hace permanente o se revoca. En situaciones donde no existe una emergencia, la vista se llevará a cabo previo a la emisión de la orden. En cualquiera de los casos, la vista administrativa se llevará a cabo de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

No se efectuará ninguna transacción de fusión, consolidación, venta de activos y/o pasivos ni ninguna otra transacción o acuerdo similar con instituciones que no sean Cooperativas. Se dispone, además, que ninguna entidad gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico emitirá órdenes u acciones administrativas decretando la administración, sindicatura, fusión, consolidación, compra de activos y pasivos o liquidación de ninguna Cooperativa Asegurada sin que dicha actuación cuente con la aprobación y visto bueno de la Corporación.

Artículo 21.-Aportación de Capital

Cada Cooperativa Asegurada deberá mantener en la Corporación, como aportación de capital y conforme ésta determine, una cantidad igual al uno (1) por ciento del total de las acciones y depósitos que posea al 30 de junio de cada año de operaciones, según se declaren en el estado certificado de acciones y depósitos o en los estados de situación certificados que se requieren en esta Ley. La Corporación establecerá las normas y procedimientos para determinar anualmente el monto del depósito por concepto de aportación de capital que deberá mantener cada Cooperativa Asegurada, según varíen sus acciones y depósitos. Asimismo, establecerá las reglas y procedimientos para determinar el incremento anual que deba requerirse en el monto de tal aportación de capital por razón de un aumento en las acciones y depósitos asegurados.

Cuando la suma de las reservas libres, no comprometidas para el pago de pérdidas y el capital total de la Corporación, exceda del dos (2) por ciento del total de acciones y depósitos asegurados, la Corporación utilizará el referido exceso para el pago de intereses sobre capital. Dichos intereses se determinarán a base de la tasa de rendimiento promedio de los activos totales de la Corporación para el período de doce (12) meses anterior a la fecha en que se efectúe el pago, reducida por el uno (1) por ciento.

Cuando una Cooperativa Asegurada sufra una reducción en sus acciones y depósitos asegurados, la Corporación le podrá reducir el monto de la aportación de capital que deberá mantener en la Corporación para el año a que corresponda, según lo establezca la Corporación por reglamento. En esos casos no se ajustará ni devolverá capital, hasta tanto la Corporación determine que tal reducción en las acciones y depósitos no obedece a una situación de insolvencia potencial. Cuando ésta sea la causa, la Corporación estará impedida de efectuar la devolución.

Artículo 22.-Devolución de Cuotas; Pago de Intereses

En los casos de liquidación o disolución voluntaria de una Cooperativa Asegurada que no conlleve pérdidas para la Corporación, ésta le reintegrará a aquélla el equivalente al por ciento de participación en el capital aportado del total de capital existente. Cuando tal liquidación o disolución conlleve pérdidas para la Corporación, ésta la tratará como si fuera un caso de insolvencia, optando por aquel curso de acción que le resulte menos

costoso y retendrá, hasta tanto se resuelva el caso en forma final y firme, todo el capital que posea la Cooperativa Asegurada en la Corporación.

La Junta podrá autorizar que se acrediten o paguen dividendos sobre la aportación de capital a las Cooperativas Aseguradas, siempre y cuando:

(a) La Corporación no tenga deudas pendientes de pago con el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas o subdivisiones políticas, ni con ningún otro acreedor que le haya facilitado préstamos para el pago de pérdidas;

(b) El pago de tales dividendos no tenga el efecto de reducir los activos libres de gravámenes de la Corporación a una suma menor del uno y medio (1 1/2) por ciento del total de capital en acciones y depósitos en todas las Cooperativas Aseguradas, según sea determinado en el estado anual certificado de la Corporación para el año anterior a aquél en el cual se desembolsaría el pago de dividendos, y

(c) No existan circunstancias extraordinarias u opiniones actuariales que justifiquen el que no se paguen tales dividendos.

En los años en que la Junta no autorice que se acrediten o paguen dividendos deberá incluir las razones para ello en su informe anual.

En el caso de las Cooperativas Aseguradas que tengan problemas de solvencia económica los dividendos se acreditarán a su cuenta de capital en la Corporación, a menos que ésta determine que su pago en efectivo puede mejorar la situación económica o la posición de liquidez de tales Cooperativas.

Artículo 23.-Tipos tarifarios

Luego de realizar los estudios actuariales correspondientes, la Corporación determinará los tipos tarifarios que se usarán como base para el cómputo de las primas por seguro que deberán pagar las Cooperativas Aseguradas. Con la aprobación de la Junta, la Corporación podrá establecer tipos tarifarios uniformes o variables de acuerdo con la exposición a riesgos de cada Cooperativa Asegurada, por factores tales como crédito, tipos de inversiones, delincuencia, liquidez, límites máximos de las acciones y depósitos asegurados o cualesquiera otros que puedan afectar la solvencia de las Cooperativas Aseguradas. Los tipos tarifarios se utilizarán para computar la prima anual, según se dispone en esta Ley. Los tipos tarifarios podrán variar desde 0.05 por ciento hasta 0.2 por ciento del total de capital y depósitos asegurados. La Junta podrá determinar tipos tarifarios mayores, siempre y cuando se tengan los estudios actuariales que sustenten los mismos.

Artículo 24.-Prima Anual

La prima anual se computará aplicando el tipo tarifario vigente al capital en acciones y depósitos de la Cooperativa Asegurada al 30 de junio de cada año. Cada Cooperativa Asegurada deberá pagar su correspondiente prima anual por adelantado según se dispone en esta Ley. En el caso de las Cooperativas que se acojan al seguro con posterioridad al 30 de junio de cada año, la prima se determinará a base del número de meses que falten para terminar su primer año de operaciones y se pagarán por adelantado antes de comenzar las mismas.

Artículo 25.-Primas especiales; Utilización de Reservas y Capital

Cuando la Corporación sufra pérdidas extraordinarias, podrá imponer a las Cooperativas Aseguradas una prima especial, la cual se distribuirá en la proporción que la prima anual pagada por cada una de ellas guarde con la prima anual total pagada por todas en el año de operaciones en el cual se haya incurrido la pérdida extraordinaria. Esta prima especial no excederá del cien (100) por ciento de la prima total recaudada en el referido año.

Cuando la prima especial impuesta en un año en particular no sea suficiente para cubrir el déficit en las operaciones de dicho año, se podrá recaudar la deficiencia mediante la imposición, en años subsiguientes, de primas especiales adicionales por tantos años como sea necesario y sujeto al límite anual antes indicado. La Corporación podrá obtener dinero en calidad de préstamo de cualquier entidad o de instituciones públicas o privadas y, cuando sea esencialmente necesario para atender sus necesidades de liquidez, podrá pignorar como garantía sus ingresos futuros por concepto de primas especiales.

Cuando las pérdidas extraordinarias sean de tal magnitud que requieran la imposición de una prima especial por un término mayor de cuatro (4) años, la Junta deberá imponer un aumento tarifario y no una prima especial. No se podrán aumentar las primas en un (1) año de operaciones con el fin de pagar pérdidas extraordinarias por una cantidad mayor del cien (100) por ciento de la prima que estaba vigente al principio de dicho año.

En caso de que, agotados los mecanismos descritos, los recursos generados no resultaren suficientes para cubrir las pérdidas, se procederá como sigue:

- (1) En primer término, se utilizará el balance de la reserva hasta agotar la misma.
- (2) Si aún quedara alguna deficiencia por cubrir, se utilizará el capital hasta un cincuenta (50) por ciento del total acumulado a principios del año de operaciones.
- (3) Si hubiere todavía alguna deficiencia, se gestionarán los recursos del Departamento de Hacienda que dispone el Artículo 31 de esta Ley.

Artículo 26.-Fondo; Contabilidad

Todo el dinero de la Corporación, incluyendo sus ingresos por concepto de primas regulares y especiales, las aportaciones de capital, los ingresos por concepto de inversiones, multas administrativas, ganancias de capital, préstamos, recuperación de pérdidas y cualesquiera otros, ingresarán al Fondo. Solamente se podrán efectuar desembolsos con cargo a dicho Fondo para los fines establecidos en esta Ley y, en todo caso, previa solicitud del Presidente Ejecutivo de la Corporación o de los oficiales autorizados para hacer la misma, en la forma y bajo las garantías dispuestas por ley y en sus reglamentos.

La Corporación establecerá un sistema de contabilidad de conformidad, hasta donde sea posible, con los principios generalmente aceptados para empresas de seguros en la práctica pública de la contabilidad (GAAP). Dicho sistema proveerá para que se identifique adecuadamente la procedencia de los ingresos y las aportaciones de capital, así como la naturaleza de los cargos contra los ingresos.

Todos los gastos operacionales de la Corporación, más las pérdidas incurridas se cargarán anualmente contra los ingresos del año por concepto de las primas regulares o especiales, las multas administrativas, los intereses y cualesquiera otros cargos que se impongan conforme a esta Ley. Si dichos ingresos no fueran suficientes para cubrir los gastos operacionales más las reclamaciones, se utilizará en primera instancia hasta el veinticinco (25) por ciento de la reserva para cubrir la deficiencia. Si la deficiencia excediera del veinticinco (25) por ciento de la reserva, se procederá según se dispone en el Artículo 25 de esta Ley.

La Corporación mantendrá cuentas en que se refleje el balance individual y agregado del capital aportado por las Cooperativas Aseguradas y de las primas regulares y especiales pagadas por éstas, así como el balance de la línea de crédito con el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y con instituciones privadas, si alguna.

Artículo 27.-Política de Inversiones

La Junta, en consulta y con el asesoramiento del Banco Gubernamental de Fomento, adoptará, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de aprobación de esta Ley, las normas, criterios y procedimientos para la inversión de los recursos de la Corporación. En la adopción de tales normas, criterios y procedimientos deberán tomarse en cuenta la naturaleza contingente del seguro de acciones y depósitos y la posibilidad de que la Corporación se pueda ver obligada a tener que liquidar inversiones para efectuar desembolsos extraordinarios en forma imprevista. En la medida en que no sea inconsistente con la solvencia y seguridad de la Corporación o con el desempeño de sus funciones, la política de inversiones considerará de manera favorable la canalización de recursos a entidades del Movimiento Cooperativo con probada condición financiera y gerencial. Las normas que se adopten deberán establecer, además, los sistemas de control interno que se observarán para realizar las transacciones relacionadas con la inversión de los fondos de la Corporación.

Se podrán hacer inversiones en empresas Cooperativas no aseguradas por la Corporación, siempre que se observen los criterios y principios de inversión que dispone esta Ley.

Los depósitos de la Corporación en instituciones financieras se tratarán como fondos públicos y las instituciones financieras tendrán que cumplir con los requisitos de ley para recibir los mismos. Para depósitos en instituciones clasificadas por agencias evaluadoras de instrumentos financieros reconocidas internacionalmente, la política de inversiones indicará cuándo se podrá obviar el requisito de ser considerados como fondos públicos.

Con el asesoramiento del Banco, la Corporación modificará estas normas de tiempo en tiempo, según lo requieran las circunstancias del mercado. Dicho Banco deberá atender las consultas de la Junta con la urgencia y prioridad que impongan las fluctuaciones imprevistas y los cambios en los parámetros que rigen los mercados financieros.

Artículo 28.-Administración de Inversiones

La Junta podrá contratar los servicios del Banco Gubernamental de Fomento o los de una persona o entidad privada para que administre las inversiones de la Corporación de acuerdo a la política de inversiones y a los términos que adopte la Junta. Asimismo, la Junta podrá delegar esta función a un oficial de inversiones de la Corporación.

La persona o entidad que tenga a su cargo la administración de las inversiones deberá rendir al Presidente Ejecutivo informes de inversiones por lo menos una (1) vez al mes. Asimismo, deberá rendir a la Junta aquellos otros informes de inversiones, con la frecuencia que ésta requiera, pero por lo menos cada tres (3) meses. En dicho informe se deberá detallar, además de cualesquiera otros datos que requiera la Junta, lo siguiente:

- (1) La compra y venta de valores realizada durante el período a que corresponda dicho informe.
- (2) Las ganancias y pérdidas producto de dichas compras y ventas.
- (3) Los intereses devengados durante el período que comprenda el informe.
- (4) Las colaterales que se hayan dado como garantía y su valor estimado en el mercado.
- (5) Los recursos líquidos disponibles para atender situaciones imprevistas.
- (6) Las ganancias o pérdidas que tendría la Corporación si se viera obligada a liquidar activos financieros para atender pérdidas extraordinarias.

Artículo 29.-Préstamos y emisión de instrumentos de deuda y otros valores

(a) Sujeto a la aprobación de dos terceras (2/3) partes del total de los miembros de la Junta, se autoriza a la Corporación a tomar dinero a préstamo de cualquier entidad

financiera privada, pública o de naturaleza Cooperativa, siempre y cuando dicha transacción se efectúe bajo términos y condiciones cónsonos con y afines a las condiciones del mercado. En igualdad de condiciones se dará preferencia a entidades Cooperativas organizadas bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Asimismo, se faculta al Banco Gubernamental de Fomento y al Banco de Desarrollo Económico para otorgar préstamos a la Corporación bajo las condiciones que acuerden entre sí, incluyendo el otorgamiento de garantías. El Secretario de Hacienda vendrá obligado a garantizar el pago de principal e intereses de los préstamos que tome o haya tomado la Corporación, así como cualquier adelanto de dinero mediante pagarés, notas, obligaciones de capital, bonos u otros instrumentos de deuda emitidos por la Corporación.

(b) (1) Sujeto a la aprobación de dos terceras (2/3) partes del total de miembros de la Junta, la Corporación podrá emitir instrumentos de deuda u otros valores con o sin valor a la par, en las series y denominaciones y con las preferencias y derechos relativos, de participación u otros derechos especiales, condicionales, limitados o restringidos que se declaren y expresen en la resolución o resoluciones que dispongan la emisión de tales instrumentos según la aprobación de la Junta de Directores. Ningún instrumento emitido por la Corporación concederá derechos de voto ni participación en las asambleas de la Corporación ni en los procesos de elección de directores ni designación de oficiales de la Corporación. No podrán emitirse ni venderse instrumentos que impongan condiciones previas a la Corporación relativas a decisiones operacionales ni de política pública de la Corporación.

(2) Los instrumentos emitidos por la Corporación podrán ser redimibles en los plazos y a los precios, y podrán emitirse con las denominaciones, preferencias y derechos relativos, de participación, de opción u otros derechos especiales y sus condiciones, limitaciones o restricciones que se consignen en la resolución o resoluciones que dispongan la emisión de estas acciones y que apruebe la Junta de Directores con el voto de dos terceras (2/3) partes del total de sus miembros. Los instrumentos emitidos por la Corporación podrán estar colateralizados.

(3) Los tenedores de los valores emitidos por la Corporación, de cualquier clase o serie, tendrán derecho a dividendos o intereses al tipo y en las condiciones y plazos que consten en la resolución o resoluciones que dispongan la emisión de estas acciones y que apruebe la Junta de Directores con el voto de dos terceras (2/3) partes del total de sus miembros. Los dividendos o intereses que devenguen las personas que adquieran o posean instrumentos de cualesquiera clase emitidos por la Corporación estarán exentos del pago de la contribución sobre ingresos fijada por la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994" y de toda clase de contribución sobre propiedad mueble.

Artículo 30.-Asignaciones

Cuando el Presidente de la Junta de la Corporación certifique que la Corporación no cuenta con fondos suficientes para honrar un préstamo, le deberá notificar la certificación al Secretario de Hacienda, que queda por la presente Ley autorizado para desembolsar del Fondo General, con previa notificación al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, los dineros requeridos para pagar el principal e intereses de dicho préstamo. Las cantidades tomadas prestadas o mediante anticipo, más los intereses respectivos, serán honrados con una asignación de fondos a incluirse en el presupuesto del segundo año fiscal siguiente al año en que se concedieron dichos préstamos o anticipos. El total de todo desembolso de dinero realizado por el Secretario de Hacienda por disposición del presente Artículo, sumado a las cantidades garantizadas por disposición del Artículo 29(a) de esta Ley, no podrán sobrepasar la cantidad de treinta millones (30,000,000) de dólares. Esta autorización al Secretario de Hacienda estará vigente hasta el cierre del año

fiscal dos mil diez (2010). Disponiéndose, que la garantía será reducida por el monto de capital de la Corporación. Disponiéndose, además, que en la eventualidad de que en un (1) año contable sufriera una reducción el capital de la Corporación, la garantía no aumentará para compensar tal reducción, y la cantidad en garantía será igual al año previo.

Artículo 31.-Disponibilidad de Recursos Gubernamentales

Se autoriza a la Corporación a tomar dinero prestado al Departamento de Hacienda de Puerto Rico. Se autoriza e instruye al Secretario de Hacienda a prestar a la Corporación, de cualesquiera fondos disponibles y sujeto a los términos que mutuamente establezcan, los fondos que de tiempo en tiempo le solicite la Corporación para pagar las garantías que establece el seguro de acciones y depósitos. Estos préstamos estarán sujetos a una cantidad máxima igual, cual sea mayor: (1) la suma que haya desembolsado o comprometido la Corporación, incluyendo reservas, capital y el valor actuarial estimado, al momento de la petición de las primas especiales pendiente de cobro; o (2) al capital aportado a la Corporación por las Cooperativas Aseguradas. La Corporación podrá requerir los desembolsos sin limitación por año fiscal. La Corporación reembolsará los fondos que le preste el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo a los términos y condiciones que acuerde con el Secretario de Hacienda al momento de concederse los préstamos, pero teniendo en cuenta las necesidades de liquidez y recursos de la Corporación. Dichos términos podrán incluir la pignoración de colaterales, incluyendo la de primas especiales o ingresos futuros por concepto de ingresos tarifarios que se fijen de acuerdo a esta Ley y cuyo cobro se haya diferido para años futuros.

Artículo 32.-Informe Anual de la Corporación

La Corporación rendirá al Gobernador, a la Asamblea Legislativa y a las Cooperativas un informe anual sobre todas sus operaciones y actividades, no más tarde los treinta (30) días siguientes a la fecha que lo apruebe la Junta. Este informe deberá incluir lo siguiente:

- (1) Un estado de situación económico certificado por un contador público autorizado.
- (2) Un estado de ingresos y gastos para el año a que corresponda el informe.
- (3) Estados detallados sobre la experiencia de reclamaciones del programa durante el año, incluyendo las reclamaciones pagadas, las reportadas y no pagadas, al igual que un estimado de las incurridas y no informadas.
- (4) Un informe sobre los títulos de inversión y propiedad de la Corporación.
- (5) Información sobre la liquidez del programa, la naturaleza y calidad de sus colaterales y una evaluación que incluya, entre otros, los datos e indicadores estadísticos y financieros que se consideren necesarios para la adecuada interpretación de la situación actuarial del seguro de acciones y depósitos y del resultado de sus operaciones.

Copia del informe anual deberá someterse a la consideración del Comisionado de Seguros de Puerto Rico, quien lo evaluará e informará a la Junta de Directores y al Gobernador los señalamientos y recomendación que estime necesarios en torno a la condición financiera de la Corporación y la suficiencia de sus reservas.

Artículo 33.-Asamblea Anual

La Corporación deberá celebrar una asamblea anual informativa de todas las Cooperativas Aseguradas dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre de sus operaciones anuales. En esta asamblea se discutirá el informe anual indicado en el Artículo 32 de esta Ley. De existir causas que impidan la celebración de la asamblea dentro de ese período, la Junta podrá, por aprobación de dos terceras (2/3) partes de sus miembros, prorrogar la celebración de la misma por un período máximo de ciento veinte (120) días.

Artículo 34.-Omisión de Rendir Informes

Toda Cooperativa Asegurada que sin causa justificada deje de radicar, corregir o publicar los informes requeridos por esta Ley o deje de pagar las primas o de aportar el capital exigido en esta Ley, dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la fecha en que la Corporación lo requiera, estará sujeta a una multa administrativa no mayor de cien dólares (\$100) por cada día que deje de cumplir con tal obligación.

Artículo 35.-Violación a Reglamentos

Toda Cooperativa Asegurada que deje de cumplir con las normas y reglamentos que adopte la Corporación de acuerdo a esta Ley estará sujeta al pago de una multa administrativa que no excederá de cien (100) dólares por cada día en que subsista tal incumplimiento.

Artículo 36.-Fiscalización y Auditoría por el Contralor

Los bienes, cuentas, desembolsos, fondos e ingresos de la Corporación estarán sujetos a la fiscalización y a las auditorías que realice la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Artículo 37.-Se deroga el subinciso (17) y se reenumera el subinciso (18) como subinciso (17) del Artículo 4 de la Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, según enmendada, para que se lea como sigue:

“Artículo 4.-Definiciones

Los siguientes términos, a los efectos de esta Ley, tendrán el significado que a continuación se expresan:

(a) ...

(g) ...

(1) ...

(17) La Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, creada por la Ley Núm. 133 de 28 de junio de 1966, según enmendada, [3, L.P.R.A.secs. 862 et seq.], en lo referente a los negocios que estén bajo el deber de fiscalización y supervisión de la Oficina del Comisionado.

(h) ...”

Artículo 38.- Se enmienda el inciso (a) y el primer párrafo del inciso (b) del Artículo 8 de la Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, según enmendada, para que se lea como sigue:

“Artículo 8.- Junta Financiera - Creación y miembros

(a) Se crea la Junta Financiera en la Oficina del Comisionado, la cual se compondrá de nueve (9) miembros, incluyendo al Comisionado.

(b) Los otros miembros son: el Secretario de Hacienda, que actuará como Presidente de la Junta, el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, el Secretario de Asuntos del Consumidor, el presidente del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico , el presidente de la Junta de Planificación, el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, el Presidente Ejecutivo de la Corporación Pública para la supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico y el Comisionado de Seguros.

Artículo 39.-Derogación

Se deroga por la presente la Ley Núm. 5 de 15 de enero de 1990, según enmendada, conocida como "Ley de la Corporación de Seguro de Acciones y Depósitos de Cooperativas de Ahorro y Crédito".

Artículo 40.-Continuidad de Operaciones

(a) Independientemente de la derogación de la Ley Núm. 5 de 15 de enero de 1990, según enmendada, la Corporación mantendrá su existencia jurídica, operacional y financiera de forma continua e ininterrumpida, quedando sujeta a las disposiciones de la presente Ley a partir de su aprobación.

(b) Los reglamentos, órdenes, acuerdos, procedimientos administrativos, contratos y demás actuaciones de la Corporación adoptados e iniciados previo a la aprobación de la presente Ley continuarán vigentes, hasta tanto los mismos sean modificados acorde con las disposiciones de la presente Ley.

Artículo 41.-Separabilidad

Si alguna disposición de esta Ley fuera declarada nula o inconstitucional por un tribunal con jurisdicción y competencia, tal declaración no afectará ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha declaración de nulidad o inconstitucional quedará limitado a la disposición que así hubiere sido declarada nula o inconstitucional.

Artículo 42.-Vigencia

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

4.30. REPUBLICA DOMINICANA

LEY DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS

LEY 127/64

(del 27 de enero de 1964)

TITULO I

CAPITULO I

DE LAS COOPERATIVAS DISPOSICIONES GENERALES, NATURALEZA Y FINES

Artículo 1

Son cooperativas las sociedades de personas naturales y jurídicas sin fines de lucro que reúnan las siguientes condiciones:

- a) Funcionar conforme al principio del derecho de igualdad entre sus miembros;
- b) Funcionar con número variable de asociados, nunca inferior a quince; y de acuerdo con las disposiciones reglamentarias aplicables a los diferentes tipos de cooperativas;
- c) Tener capital variable y duración indefinida;
- d) No perseguir fines de lucro;
- e) Conceder a cada asociado un sólo voto;
- f) Procurar el mejoramiento social y económico de sus asociados mediante la acción conjunta de éstos en una obra colectiva;
- g) Repartir sus rendimientos o excedentes netos a prorrata entre los asociados de acuerdo con el monto de las operaciones realizadas con la Sociedad;
- h) Mantener y aplicar las bases universales del cooperativismo conocidas como "PRINCIPIOS ROCHDALES";

- i) No conceder ventajas ni privilegio alguno a los iniciadores, fundadores y directores, ni preferencia a parte alguna de capital;
- j) Disponer con claridad la responsabilidad limitada de cada socio.

Artículo 2

Sólo serán Sociedades Cooperativas las que funcionen de acuerdo con esta Ley.

Artículo 3

Queda prohibido que las sociedades e individuos no sujetos a las disposiciones de esta Ley usen en su razón social las palabras "Cooperativas", "Cooperativismo", "Cooperación" o "Cooperadores" que pudieran inducir a creer que se trata de una Sociedad Cooperativa.

Artículo 4

La autorización para el funcionamiento de las Cooperativas no confiere otras prerrogativas que las expresamente establecidas por la Ley y en consecuencia ni la fijación de un determinado campo de operaciones, ni las actividades concretas que las sociedades puedan realizar, conceden a ésta o a sus miembros derechos de exclusividad.

Artículo 5

Las Sociedades Cooperativas no deberán desarrollar actividades distintas de aquellas para las que están legalmente autorizadas, ni se les autorizará actividades conexas.

Artículo 6

Las Sociedades Cooperativas no podrán pertenecer ni a la Cámara de Comercio ni a las Asociaciones de Comerciantes o de Productores.

CAPITULO II

DE LA CONSTITUCION Y RECONOCIMIENTO OFICIAL

Artículo 7

La Constitución de las Sociedades Cooperativas deberá hacerse mediante Asamblea General que celebren los interesados. En esta Asamblea se aprobará, en forma expresa, los Estatutos que regirán la vida de la Cooperativa y se elegirá a los integrantes de los cuerpos directivos.

Artículo 8

Los Estatutos aprobados contendrán entre otras disposiciones las siguientes:

- a) Nombre y domicilio de la cooperativa
- b) Objeto de la Cooperativa, expresando con precisión cada una de las actividades que deberá desarrollar, así como las reglas a que deberán sujetarse aquéllas y su posible campo de operaciones;
- c) Régimen de responsabilidad limitada;
- d) Forma de constituir o incrementar el capital social, valor de los certificados de aportación, forma de pago y devolución de su valor, así como evaluación de los bienes y derechos en caso de que se aporten;
- e) Requisitos para la admisión; retiro voluntario y exclusión de los socios;
- f) Forma de constituir los fondos de reserva, su monto, su objeto y reglas para su aplicación;
- g) Duración del ejercicio económico que no deberá ser mayor de un año;
- h) Deberes y derechos de los asociados, enumerando con precisión y claridad las garantías e igualdad absoluta de ellos;

- i) Mínimo de capital pagado para iniciar operaciones;
 - j) Manera como serán administrados y fiscalizados los negocios y estableciendo los organismos y definiendo su formación, duración y atribuciones con claridad y minuciosidad;
 - k) El modo de convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias y la mayoría necesaria para la validez de sus deliberaciones y acuerdos;
 - l) Forma en que el personal que tenga a su cargo fondos y bienes deberá garantizar su manejo;
 - ll) Reglas para la disolución y liquidación de la cooperativa;
 - m) La forma de transmitir los certificados de aportación y las limitaciones que al efecto se estipulen;
 - n) Término dentro del cual se reunirá la Asamblea General después del ejercicio social para elegir los funcionarios y órganos administrativos de la cooperativa; para conocer de la rendición de cuentas, distribución de excedentes, inventarios, balances, memorias y, en general, para considerar todos los asuntos sobre los cuales dicha Asamblea tenga jurisdicción;
- La convocatoria y la realización de la Asamblea así como el estatuto aprobado deberán llegar los requisitos que esta Ley y su Reglamento señalen.

Artículo 9

Las cooperativas que se constituyan de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7. podrán gozar de personalidad jurídica y de los demás beneficios de esta Ley, en virtud de un derecho de incorporación que dictará el Poder Ejecutivo, a solicitud de un funcionariado de la misma dirigida por la vía del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo.

El Reglamento de esta Ley indicará los requisitos y trámites complementos a seguir por las cooperativas, tanto para su constitución e incorporación, como para la modificación de sus Estatutos.

CAPITULO III DE LOS ASOCIADOS

Artículo 10

Para pertenecer a una Cooperativa se requiere:

- a) Ser mayor de edad o legalmente emancipado, excepto si se trata de los miembros de las Cooperativas Juveniles y de las Cooperativas de Crédito y Ahorro;
- b) Reunir los requisitos y condiciones exigidos en esta Ley, su Reglamento y los Estatutos de la Sociedad.

Artículo 11

Pueden formar parte de las Cooperativas las personas jurídicas que no persigan fines de lucro y cuyos propósitos mantengan afinidad con los del Movimiento Cooperativista.

Artículo 12

No se podrán constituir en forma cooperativas, ni se le concederá personalidad jurídica, a ningún grupo de personas físicas o morales, excepción esta última de las propias cooperativas, que tengan el propósito de servir de intermediarios lucrativos entre consumidores y productores en la fase de distribución de bienes y servicios dentro del proceso económico.

Artículo 13

No podrá suprimirse el derecho de retiro voluntario de los socios de las Cooperativas. Será nula toda disposición que implique renuncia de sus derechos, pero los estatutos deben establecer requisitos y reglas para dicho retiro.

Artículo 14

El asociado dimitente o excluido por cualquier causa no tiene derecho a las reservas ni a la valorización del capital; sino únicamente al monto de sus certificados de aportación y a la parte proporcional del excedente acumulado por el uso que haya hecho de la sociedad hasta el momento en que su retiro haya sido aprobado.

TITULO II

DEL FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

CAPITULO IV

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Artículo 15

La dirección, administración y control de las Sociedades Cooperativas estarán a cargo de:

- a) Asamblea General;
- b) Consejo de Administración;
- c) El Consejo de Vigilancia;
- d) El Comité de Crédito y aquellos comités o comisiones que establezcan los Estatutos.

CAPITULO V

DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 16

La Asamblea General es el organismo superior y sus acuerdos obligan a todos los asociados presentes o ausentes, siempre que los mismos se hubieren tomado de conformidad con el Estatuto Social y esta Ley.

Artículo 17

La Asamblea General será convocada por el Presidente por lo menos con diez días de anticipación, por los medios de publicidad que dispongan los Estatutos.

Artículo 18

La Asamblea General resolverá sobre asuntos de importancia para la sociedad y establecerá las reglas generales que deben regir el funcionamiento social.

Dentro de las facultades que le confieren los Estatutos, esta Ley y sus reglamentos, la Asamblea General deberá conocer de:

- a) La apelación de los asociados a las decisiones del Consejo de Administración relativas a la separación de aquellos de la cooperativa;
- b) Modificación de los Estatutos;
- c) Disolución de la sociedad;
- d) Fusión de la cooperativa con otras sociedades de igual finalidad;
- e) Afiliación a una Federación o Confederación;
- f) Cambios generales en los sistemas de producción, trabajo y servicios de la sociedad;
- g) Aumento o disminución del capital social;
- h) Nombramientos y remoción con motivo justificado de los miembros del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, del Comité de Crédito y comisiones de los comités especiales;
- i) Examen de cuentas y balances;

- j) Informes de los Consejos y de los Comités;
- k) Responsabilidad de los miembros de los Consejos y de los Comités con el fin de pedir la aplicación de las sanciones en que incurren o imponer las que sean de su competencia;
- l) Aplicación de sanciones disciplinarias a los asociados;
- m) Aplicación de los fondos sociales y reservas;
- n) Reparto de rendimientos, incluyendo la fijación de interés sobre el capital;
- ñ) Emisión de bonos o contratación de préstamos para la cooperativa en exceso del 50% del capital pagado.

Artículo 19

Las Asambleas estarán legalmente constituidas con un quórum de dos quintas partes de los asociados activos de las cooperativas.

Artículo 20

Si una hora después de lo señalado en la convocatoria no se completa el quórum establecido en el Artículo anterior, la Asamblea quedará legalmente constituida con un 20% de los asociados sin necesidad de una segunda citación.

Se exceptúan de esta disposición los casos señalados en el Artículo 18 incisos b), c) y d) en que sí se necesitará segunda citación y además el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los asociados presentes.

Artículo 21

Cuando los asociados pasen de mil y residan en localidades distintas de aquella en que debe celebrarse la Asamblea General, ésta podrá efectuarse por delegados asociados elegidos por secciones o por distritos.

Los Estatutos fijarán las bases para que la Asamblea General de secciones o distritos nombre sus delegados, determine la duración de su mandato y la proporción de delegados y votos por asociados representados.

Artículo 22

No se admitirán votos por poder, excepto en cooperativas organizadas por secciones o distritos y en las cooperativas organizadas por cooperativas.

El Reglamento señalará las pautas, que al respecto deben consignar los correspondientes Estatutos.

CAPITULO VI

DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA Y DEL COMITE DE CREDITO

Artículo 23

El Consejo de Administración será el órgano ejecutivo de la Asamblea General y tendrá la representación de la sociedad, y podrá elegir entre los socios o personas no asociadas a uno o más Gerentes con las facultades y poderes que les asigne para realizar los fines de la sociedad.

Artículo 24

El Consejo de Administración estará integrado por un número de Consejeros, no menor de 5, que desempeñarán los cargos de Presidente, Vice-Presidente, Tesorero, Secretario y Vocales. Podrá elegirse además dos consejeros suplentes, para que reemplacen aquellos que cesaren antes de vencer su período.

Artículo 25

Los miembros del Consejo de Administración serán elegidos por votación secreta, fijándose en los estatutos el período de la elección. Ningún período podrá ser mayor de tres años ni ningún consejero podrá ser reelecto por más de dos períodos consecutivos.

Los Estatutos fijarán el número de consejeros que serán renovados en cada término, la forma de su elección y las demás limitaciones y calificaciones necesarias para ocupar los cargos.

Artículo 26

Los acuerdos para la administración de la sociedad deberán ser tomados por mayoría de los consejeros presentes en sesión ordinaria o extraordinaria del Consejo de Administración legalmente constituido. Los asuntos de trámites o de poca trascendencia serán despachados por los miembros del propio Consejo a quienes corresponda según las funciones que señalen los Estatutos y bajo su propia responsabilidad, debiendo dar cuenta del uso de esta facultad en la próxima reunión del Consejo.

Artículo 27

El Consejo de Administración se reunirá dentro de los 8 días siguientes a su elección para la designación de los cargos correspondientes dentro de su propio seno, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos. Los funcionarios que cesaren ocuparán sus puestos hasta que los nuevos designados tomen posesión.

CAPITULO VII DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

Artículo 28

El Consejo de Vigilancia ejercerá la suspensión de todas las actividades de la sociedad y tendrá derecho de veto, con el objeto de que el Consejo de Administración reconsidere las resoluciones vetadas. El derecho de veto debe ejercerse ante el Presidente del Consejo de Administración dentro de las 48 horas de haber recibido el de Vigilancia la notificación de los acuerdos de aquél, la cual debe ser transmitida por el Secretario del Consejo de Administración al Presidente del Consejo de Vigilancia dentro de las 48 horas de aprobada. El Consejo de Administración podrá ejecutar su decisión bajo su responsabilidad, pero la siguiente Asamblea General estudiará el conflicto y resolverá en definitiva.

Artículo 29

El Consejo de Vigilancia estará constituido por un número impar de miembros no mayor de 5 y por lo menos un suplente. Escogerá dentro de su seno un Presidente y un Secretario; los demás serán vocales. Serán designados en la misma forma y con igual duración que las establecidas en el Artículo 25 para el Consejo de Administración y adoptarán sus acuerdos por mayoría de sus miembros en sesión regularmente constituida.

Artículo 30

Además de los deberes que puedan asignarle los estatutos de la Cooperativa, el Consejo de Vigilancia cumplirá con los siguientes:

- a) Examinar trimestralmente los libros, documentos, balances y verificar el estado de caja de la sociedad;
- b) Presentar a la Asamblea General un informe de las actividades ejercidas durante el período en que él haya actuado;

- c) Denunciar los errores o violaciones que se hayan cometido, sugiriendo las medidas que tiendan a impedir esas circunstancias;
- d) Convocar extraordinariamente la Asamblea General, cuando a su juicio se justifique esa medida.

Artículo 31

El Consejo de Vigilancia se reunirá mensualmente , y en caso urgente, las veces que fuere necesario.

La reunión extraordinaria del Consejo de Vigilancia puede ser convocada ya sea por el Consejo de Administración o por los asociados en la forma en que estipulen los estatutos.

Artículo 32

Las resoluciones tomadas por los Consejos de Administración y Vigilancia serán apelables ante la Asamblea General. La decisión tomada por esta última tendrá carácter definitivo. Sin embargo, si se ha violado la Ley o los estatutos de la sociedad, los perjudicados pueden hacer valer sus derechos por la vía judicial correspondiente.

CAPITULO VIII

DEL COMITE DE CREDITO Y OTRAS COMISIONES

Artículo 33

Las sociedades que por su naturaleza tengan que conceder crédito a sus asociados en calidad de préstamo o anticipo, sea de dinero, solidariamente responsable por el Consejo de Administración y con el Consejo de Vigilancia, de la buena marcha de la sociedad.

Artículo 34

El Comité de Crédito estará constituido por tres (3) miembros titulares y un suplente elegidos por los socios en la Asamblea General Ordinaria. El primer año se elegirá uno por año, uno por dos años y uno por tres años. Después del primer año el mandato de los miembros o miembro que se elijan será por tres años.

Artículo 35

El Comité de Crédito será el árbitro de todas las solicitudes de préstamos y créditos de los socios,, con excepción de aquellos casos de consejeros o miembros del mismo Comité que solicitan préstamos en exceso a sus aportaciones de capital. En estos casos las solicitudes deberán ser aprobadas por una mayoría simple del Consejo de Administración, con el Consejo de Vigilancia y con el Comité de Crédito en reunión conjunta y el acuerdo figurará en el libro de actas del primero.

Artículo 36

La Asamblea General y el Consejo de Administración podrán designar las comisiones ad-hoc que sean necesarias para realizar estudios especiales y entender en asuntos puramente técnicos que requieren conocimientos especializados de la materia bajo consideración. Las comisiones rendirán sus informes al Consejo de Administración y a la Asamblea General solamente cuando así les sea requerido. Los miembros de cualquier comisión especial, el Presidente del Consejo de Administración o un asociado designado por él presidirá cualquier comisión especial que se nombre. Toda comisión especial debe rendir un informe de sus gestiones e investigaciones ante el Consejo de Administración, o ante la Asamblea General de Socios cuando le sea requerido.

CAPITULO IX

DEL CAPITAL Y LOS FONDOS SOCIALES

Artículo 37

El Capital de las sociedades se integrará con las aportaciones de los asociados, con los donativos que reciban y con los porcentajes de rendimiento que se destinen para aumentarlo.

Artículo 38

Las aportaciones podrán hacerse en efectivo, bienes, derechos o trabajo; estarán representadas por certificados que serán nominativos indivisibles, de igual valor y sólo transferibles por acuerdo del Consejo de Administración y en las condiciones que determinen los Estatutos. No podrán valorizarse como aportaciones los trabajos realizados por los promotores y destinados a conseguir la organización de la cooperativa.

Artículo 39

El interés que devengará cada certificado de aportación o cuota parte de capital totalmente pagada y no retirada antes del cierre del ejercicio, no excederá del 5% anual pagadero de los excedentes de cooperativa según balance general del cierre de operación. El interés se calculará a partir del día primero del mes siguiente en que se efectuó el pago total del certificado de aportación. El tipo de interés a pagarse será fijado por la Asamblea General según remendación del Consejo de Administración y de acuerdo con los resultados del balance al cierre de operación.

Artículo 40

Cada socio deberá aportar por lo menos el valor de un certificado de aportación del total del capital suscrito para ser considerado socio con todos los derechos y obligaciones correspondientes. El Consejo de Administración determinará la forma y pago de los certificados de aportación adicionales para cada socio. El Estatuto de la cooperativa establecerá la forma en que se evidenciará la aportación del socio, bien sea mediante anotaciones en una libreta especial o por la emisión de certificados de aportación o libretas representativas de las aportaciones de capital y en proporción del capital total de cada socio. El Estatuto de la Cooperativa proveerá del capital total de cada socio. El Estatuto de la Cooperativa proveerá el procedimiento a seguirse.

Artículo 41

La Asamblea General podrá acordar la reducción del capital cuando juzgue que existe un excedente del mismo sin afectar las operaciones de la sociedad. Cuando se acuerde reducir el capital que se juzgue excedente, se hará la devolución a los socios en orden de emisión de certificados de aportación o libretas representativas de las aportaciones de capital y en proporción del capital total de cada socio. El Estatuto de la Cooperativa proveerá el procedimiento a seguirse.

Artículo 42

Cuando el acuerdo sea en el sentido de aumentar el capital, todos los socios quedará obligados a suscribir y pagar el aumento en la forma y término que acuerde la Asamblea General. Además de lo anterior, podrá incrementar el capital con el porcentaje de los rendimientos que con este objeto puede destinar la Asamblea General anualmente, entregado a cada socio el correspondiente certificado de aportación por parte proporcional que deja invertida en la sociedad.

Artículo 43

Los certificados de aportación, depósitos, participaciones y derechos de cualquier clase correspondiente a los asociados, quedan vinculados desde su origen a favor de la cooperativa por las obligaciones que los asociados hayan contraído con ésta.

Artículo 44

Los créditos que adquiriera la cooperativa estarán garantizados por todos los bienes de que disponga la sociedad, dentro de las limitaciones que fija esta Ley y los Estatutos respecto a su responsabilidad económica y social.

El acreedor ejercerá sus derechos a través de los organismos directivos de la cooperativa.

Artículo 45

Para los efectos legales se estimará que las cooperativas no obtienen lucro. Los excedentes que arroje el balance serán considerados como ahorros producidos por la gestión económica de la cooperativa.

Artículo 46

Las sociedades cooperativas organizadas de acuerdo a esta Ley deberán constituir, por lo menos, los siguientes fondos de reserva:

- a) Fondo de Educación Cooperativa;
- b) Fondo de Reserva General; el cual no será dividido entre los socios aun en el caso de disolución de la cooperativa;
- c) Cualquier otro fondo especial de acuerdo con las normas de contabilidad y administración de negocios, para lograr el objetivo de la sociedad.

Los mencionados fondos se reservarán; con prioridad al pago de intereses sobre el capital o la devolución, de excedentes a los asociados, de los fondos creados en los incisos a) y b) de acuerdo con las distintas clases de cooperativas.

CAPITULO X

DE LA DISOLUCIÓN Y LA LIQUIDACIÓN

Artículo 47

Las sociedades cooperativas se disolverán por cualquiera de las siguientes causas:

- a) Por la voluntad de las dos terceras partes de los asociados activos. La formalización del acuerdo se hará en Asamblea General, según las pautas que rijan el Reglamento de esta Ley;
- b) Por la disminución del número de quince;
- c) Porque llegue a consumarse el objeto de la sociedad;
- d) Porque el estado económico de la sociedad no permita continuar las operaciones;
- e) Por cancelación de la autorización para funcionar, de acuerdo con las normas establecidas por esta Ley, su Reglamento y los Estatutos de la cooperativa;
- f) Por fusión con otra y otras cooperativas de la misma clase legalmente constituidas.

Artículo 48

En caso de disolución de una cooperativa, el haber social resultante de la liquidación se aplicará así:

- a) A satisfacer los gastos de la liquidación;
- b) A cubrir los beneficios sociales y salarios de los servidores a sueldo o jornales de las cooperativas;
- c) A pagar obligaciones a terceros;

d) A pagar a sus asociados el valor de la aportaciones más los intereses. En caso de una cooperativa de crédito se procederá a devolver los depósitos de los asociados antes de las aportaciones de capital;

e) El Fondo de Reserva, donativos y cualquier remanente se entregará a la Federación de Cooperativas a la cual está filiada la cooperativa disuelta, para dedicarles exclusivamente a fines de educación cooperativa.

En caso de no estar afiliada a ninguna Federación, los mencionados fondos se entregarán al Instituto del Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) para fines de educación y promoción cooperativa.

Los asociados que se retiren no podrán establecer reclamación contra estos fondos.

TITULO III

DE LA ORGANIZACION NACIONAL DE COOPERATIVAS

CAPITULO XI

DE LAS COOPERATIVAS Y SU CLASIFICACIÓN

Artículo 49

Para los fines de esta Ley se clasificarán las cooperativas bajo las siguientes denominaciones:

- a) Cooperativas de Consumo;
- b) Cooperativas Agropecuarias;
- c) Cooperativas de Producción y Trabajo;
- d) Cooperativas de Vivienda;
- e) Cooperativas de Ahorro y Crédito;
- f) Cooperativas de Seguros y Salud;
- g) Cooperativas de Participación Estatal;
- h) Cooperativas Juveniles y Escolares;
- i) Servicios Públicos Cooperativos.

El Reglamento de esta Ley establecerá la definición, radio de acción características y objetivos de cada una de las cooperativas.

No obstante el régimen especial que su naturaleza exige, los servicios públicos cooperativos, para los efectos de esa Ley, serán considerados como un tipo de sociedades cooperativas. El Reglamento proveerá lo conveniente.

Artículo 50

Las cooperativas regidas por la presente Ley podrá aceptar asociados extranjeros que hayan fijado su domicilio en el país, en proporción no mayor del 50% de su nomina total.

Artículo 51

Todas las cooperativas organizadas bajo esta Ley, con excepción de las de Ahorro y Crédito y de Vivienda, podrán realizar transacciones comerciales y prestar servicios a no asociados hasta el límite del cuarenta por ciento del volumen total de negocios con los asociados. Las transacciones con el Estatuto se consideran como realizadas con un asociado.

Artículo 52

El excedente neto, proveniente de transacciones con no asociados deducidas las contribuciones de Ley, será dedicado a aumentar el fondo de educación cooperativa establecido en el artículo 46.

Artículo 53

Las cooperativas de ahorro y crédito, y de vivienda, podrán asegurar el capital y saldos deudores de sus préstamos en compañías nacionales o extranjeras que presten esta clase de servicios.

CAPITULO XII

DE LAS FEDERACIONES Y LA CONFEDERACION DE COOPERATIVAS

Artículo 54

Las sociedades cooperativas podrán formar parte de las Federaciones que se organicen de acuerdo con su clasificación y estas a su vez de la Confederación Nacional de Cooperativas. Bastará un mínimo de cinco cooperativas para poderse constituir en Federación y de dos Federaciones para constituir la Confederación Nacional. Las Federaciones, independientemente de la Confederación, podrán asociarse por decisión de su Asamblea General, con sociedades o federaciones internacionales de cooperativas con fines similares.

Artículo 55

Las Federaciones tendrán por objeto:

- a) La coordinación y vigilancia de las cooperativas afiliadas para la realización de los programas económicos y sociales y consecución de los objetivos de las mismas;
- b) El facilitar el aprovechamiento en común de bienes y servicios;
- c) La compra y venta en común de las materias primas y productos de las cooperativas afiliadas, así como la compra en común de los artículos de consumo;
- d) La representación y la defensa general de los intereses de las sociedades federadas, e intervenir en los conflictos que surjan en el seno de las mismas, como árbitros compondores;
- e) Servir de lazo de unión entre las cooperativas afiliadas, la Confederación y el Estado;
- f) Ayudar en la disolución de cualquier cooperativa, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento de esta Ley;
- g) Fomentar el desarrollo de cooperativas de tipo similar a las federadas, en colaboración con el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo.

Artículo 56

Se podrán formar distritos regionales. Estos distritos sólo tendrán jurisdicción en el área determinada, con el objeto de coordinar en dicha circunscripción, la acción cooperativa en sus aspectos generales, especialmente en su desarrollo y promover la afiliación de las cooperativas a la Federación. Cada distrito actuará de acuerdo a los Estatutos de su Federación y de su cooperativa.

Artículo 57

La Confederación Nacional de Cooperativas tendrá por objeto:

- a) El fomento y defensa de todo movimiento cooperativo en el país en colaboración con el Estado y las entidades particulares locales y extranjeras, que auspician el cooperativismo en el mundo;
- b) La coordinación de las necesidades económicas del movimiento cooperativista a través de las Federaciones o directamente con las cooperativas, si no existen aquellas;
- c) El desarrollo de actividades económicas y comerciales que faciliten los fines de la Confederación Nacional y de las Federaciones asociadas a ella;
- d) Conocer los conflictos que surjan en las Federaciones y entre éstas y las sociedades cooperativas y ayudar a resolverlo;

e) Representar y defender los intereses de las Federaciones asociadas a petición de éstas.

Artículo 58

La constitución, administración y funcionamiento de las Federaciones y de la Confederación Nacional se regirá por las disposiciones que esta ley y su Reglamento establezcan para sociedades cooperativas en cuanto les sea aplicables y por lo demás que sobre el particular se establezca en sus respectivos estatutos.

CAPITULO XIII

DE LOS IMPUESTOS Y PROTECCIÓN A LOS ORGANISMOS COOPERATIVOS

Artículo 59

Declárase de interés público la promoción y asistencia de las sociedades cooperativas, reconociendo en la existencia de estas instituciones orientadas y reguladas, por el medio necesario para promover el mejoramiento socioeconómico de la comunidad nacional y el fortalecimiento de los principios democráticos de la nación.

Artículo 60

Todos los actos relativos a la constitución, autorización registro de las sociedades cooperativas, de las Federaciones y de la Confederación Nacional quedarán exentos de todo impuesto.

Artículo 61

Quedan también exoneradas de todo impuesto, tasa o contribución, sea fiscal, regional o municipal las sociedades cooperativas que generen sus excedentes de las transacciones de sus socios. El Reglamento de esta Ley dispondrá lo necesario para que la liberación sea proporcional cuando en los excedentes intervenga el servicio a terceros. La exoneración se extenderá a los superávits que obtengan, a los documentos que otorguen y a los actos y contratos que realicen.

Artículo 62

Para la debida protección y fomento de las sociedades cooperativas queda autorizado el Poder Ejecutivo, para otorgar franquicias especiales, dictando al efecto las disposiciones que proceda, disponiéndose que específicamente quedan exonerados de todos los impuestos de importación aduanales y consulares todo equipo, maquinarias, materias y enseres que importen directamente o a través de terceros, las sociedades cooperativas, las Federaciones y la Confederación Nacional, para el uso de la propia sociedad en la consecución de sus fines y propósitos.

Artículo 63

Las solicitudes de exoneraciones que se formulen en virtud del artículo anterior se transmitirán por vía del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), el cual velará porque los objetos importados sean del uso y consumo de los mencionados organismos que demande el funcionamiento de la Confederación, las cooperativas y Federaciones. Las exoneraciones en ningún caso beneficiarán a terceros.

Artículo 64

Dado el carácter de interés público que esta Ley otorga a la promoción y asistencia de las cooperativas, el Poder Ejecutivo dictará las disposiciones que se consideren convenientes para la protección del Movimiento Cooperativo.

CAPITULO XIV

DE LA ASISTENCIA EDUCATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA A LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS

Artículo 65

El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo coordinará sus labores con las cooperativas, las Federaciones y la Confederación Nacional de Cooperativas para lograr el uso más eficiente de los recursos económicos y humanos en bien del movimiento cooperativista.

CAPITULO XV

DEL REGISTRO, LA VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN ESTATAL

Artículo 66

A los efectos del cumplimiento de esta Ley, las sociedades cooperativas, las Federaciones y la Confederación Nacional están obligadas a proporcionar cuantos datos y elementos se necesiten y a exhibir sus libros de contabilidad y documentación a los inspectores del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, permitiendo el acceso a sus oficinas, establecimientos y demás dependencias.

Artículo 67

Si como resultado de las inspecciones a que se refiere el artículo anterior, se tuviera el conocimiento de un hecho que implique violación de esta Ley o perjuicio para los intereses u operaciones de la sociedad, o de sus miembros, se dará aviso al Consejo de Administración, al de Vigilancia y a los asociados y se podrá convocar a Asamblea General para proponer las medidas que deban adoptarse al efecto de corregir las irregularidades que se noten, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes.

Artículo 68

Serán considerados reos de delitos de abuso de confianza y castigados como tales por las penas establecidos en el artículo 406 del Código Penal las personas que simulen constituirse en sociedades cooperativas con ánimo de aprovechar para sí las ventajas y franquicias concedidas por aquéllos por el Estado o por terceras personas.

Artículo 69

El que estafe o defraude a una cooperativa cualquiera, siendo directo, asociado o tercero frente a ella se hará merecedor a la pena que para el delito señala el Código Penal.

Artículo 70

Las infracciones a esta Ley podrán ser denunciadas por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo ante las autoridades judiciales correspondientes.

Artículo 71

Se deroga la Ley N. 4332, sobre Asociaciones Cooperativas, del 19 de noviembre de 1955, y sus modificaciones, así como cualquier otra disposición legal que le sea contraria.

Artículo 72

Se derogan específicamente las disposiciones comprendidas entre los artículos del 109 a 127, ambos inclusive, Título II de la Ley de Fomento Agrícola Número 6186, del 12 de febrero de 1963.

CAPITULO XVI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 73

Se concede un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de la publicación de esta Ley para que las sociedades cooperativas que actualmente se encuentran funcionando se organicen conforme a las disposiciones de la misma y soliciten del Poder Ejecutivo la ratificación de su autorización para funcionar.

Artículo 74

Vencido el plazo a que se refiere el artículo anterior, automáticamente quedarán canceladas las autorizaciones no ratificadas, se ordenará la liquidación de la sociedad y se aplicarán las sanciones que correspondan.

4.31. SAN CRISTOBAL Y NIEVES

No. 31 of 2011. Saint Christopher and Nevis

I assent,

CUTHBERT M SEBASTIAN

Governor-General.

17th October, 2011.

SAINT CHRISTOPHER AND NEVIS

No. 31 of 2011

AN ACT to provide for the registration, supervision, governance, operation and management of co-operative societies including credit unions, the members of which have a common bond of philosophy and socio-economic objectives, and for incidental and related purposes.

[Published 17th October 2011 - Official Gazette No. ? of 2011]

BE IT ENACTED by the Queen's Most Excellent Majesty by and with the advice and consent of the National Assembly of Saint Christopher and Nevis, and by the authority of the same as follows:

PART I

PRELIMINARY

1. Short title.

This Act may be cited as the Co-operative Societies Act, 2011.

2. Interpretation.

(1) In this Act, unless the context otherwise requires

“apex body” means a body established under section 221;

“associate” means

(a) immediate relatives of persons including a spouse or children (including step-children) and their spouses, a parent, brother or sister;

(b) any co-operative society which holds twenty per cent or more of a co-operative society's shares in accordance with section 100 of this Act;

(c) any company or co-operative society in which the co-operative society holds twenty per cent or more of shares to which voting rights are attached;

(d) a member of the Board or committee, an employee of a cooperative society, or a business partner;

(e) any company or co-operative society over which a co-operative society has control; or

(f) any company or co-operative society of which any of the persons referred to in paragraph (c) is a director, manager or has control, notwithstanding that at the relevant time any of the persons in question, not being individuals, have not yet come into existence or have ceased to exist; "Board" means the Board of directors or other directing body, by whatever name called, to whom the management of the affairs of a co-operative society is entrusted; "bonus" means a share of the surplus of a co-operative society divided among its members in proportion to the volume of business done with the co-operative society by them from which the surplus of the co-operative society were derived; "bye-laws" means the registered bye-laws made by a co-operative society under this Act and includes a registered amendment of the bye-laws; "capital base" means

(a) paid up capital being qualifying and equity shares paid up in cash and invested as risk capital by the members and forming a permanent part of the capital of the co-operative society and which are redeemable only upon transfer to another member; and

(b) institutional capital, less any amount by which that total has become impaired by operating or other losses; "CARICOM Member State" means a Member State of the Caribbean Community established by the Revised Treaty of Chaguaramas signed at Nassau, The Bahamas on 5 July 2001;

"central co-operative society" means a co-operative society whose membership comprises co-operative societies providing technical

and other services; "central credit union" means a credit union whose membership comprises principally other credit unions and generally provides liquidity services, deposit facilities and investment opportunities to members; "consumers' co-operative society" means a co-operative society whose primary purpose is to purchase, procure, process, manufacture, exchange, hire or deal in goods or services for sale at retail to its members who are to be the ultimate users or consumers of those goods and services;

"co-operative society" means a self-help, collectively owned and democratically controlled business enterprise registered under this Act, which consists of a group of people that provides socially desirable and economically beneficial services to its participating members on a joint action and not-for-profit basis; "credit union" means a co-operative society organised by a group of people with a shared field of membership for provident and productive purposes and providing cooperatively pooled financial services to its members, including savings and lending business; "delinquent loan" means a loan where a borrower has defaulted on the agreed terms of repayment; "deposit" means a sum of money paid on terms

(a) under which the sum will be repaid, with or without interest or a premium, and either on demand or at a time or in circumstances agreed by or on behalf of the person making the payment and the person receiving it; and

(b) which are not referable to the provisions of property or services or to the giving of security, and for the purposes of this definition, money is paid on terms which are referable to the provision of property or services or the giving of security if

(i) it is paid by way of advance or part payment for the sale, hire or other provision of property or services of any kind and is repayable only in the event that the property or services is or are not in fact sold, hired or otherwise provided;

(ii) it is paid by way of security for payment for the provision of property or services of any kind provided or to be provided by the person by whom or on whose behalf the money is accepted; or

(iii) it is paid by way of security for the delivery up or return of any property, whether in a particular state of repair or otherwise;

“deposit guarantee” means an insurance policy or fund that guarantees the return of funds in a credit union against loss in the event that the institution fails; “director”, means a member of the Board who is elected in accordance with section 72; “dividend” means a share of the surplus of a co-operative society divided among its members in proportion to the share capital held by them; “doubtful loan” means a loan that is twelve or more months in default; “equity shares” constitutes the common stock or risk capital in addition to qualifying shares purchased by individual and institutional members as their ownership stake in the safety, soundness and competitiveness of their co-operative society;

“Financial Services Regulatory Commission” means the Financial Services Regulatory Commission established pursuant to the Financial Services Regulatory Commission Act, No. 22 of 2009;

“guidelines” means the guidelines issued under section 8;

“housing charges” means the fee charged by a housing co-operative society to its members to cover the costs of providing housing

accommodation; “housing co-operative society” is a co-operative society that owns real estate and where each shareholder in the society is granted the right to occupy one housing unit; “housing unit” means housing accommodation intended for individual or family use;

“industrial co-operative society” means a co-operative society whose primary purpose is to operate an enterprise in which its members are the workers necessary for the operation;

“institutional capital” means the aggregate of a co-operative society’s

(a) statutory or other non-distributable general reserves;

(b) earnings retained after distribution of surplus; and

(c) such other funds which may be received by way of nonrefundable donations for no specified purpose which are not available for distribution; “legal representative” in relation to a co-operative society, member or other person means a person who stands in place of and represents the co-operative society, member or other person and includes a trustee, executor, administrator, assignee, or receiver of the cooperative society, member or other person; “member” includes a person or co-operative society joining in the application for the registration of a co-operative society, and a person or co-operative society admitted to membership after registration in accordance with this Act and the bye-laws;

“minor” means an individual under the age of fourteen years;

“officer” includes a president, vice president, secretary, treasurer, director or other person empowered under this Act or the Regulations or byelaws to give directions in regard to the business of a co-operative society;

“primary co-operative society” means a co-operative society that is owned by individual members; “qualifying shares” means the mandatory, non withdrawable minimum shares to be purchased by an approved applicant to be admitted and to enjoy the full rights and privileges of becoming a member of a cooperative society;

“Register” means in the case of credit unions, the Register of Credit Unions to be kept under section 6; in the case of co-operative societies other than credit unions, the Register of Co-operative Societies to be kept under section 6; “Regulations” means the Regulations made pursuant to section 247;

“secondary co-operative society” means a co-operative society that is owned by an association of primary co-operative societies;

“security” when issued by a co-operative society

(a) means a share or a debt obligation of a co-operative society; and

(b) includes a certificate confirming the share or debt obligation;

“security interest” means an interest in or charge on the property of a cooperative society by way of a mortgage, charge, hypothec pledge or other obligation taken by a creditor to secure payment of a debt of the co-operative society; “special resolution” means a resolution

(a) at least ten days’ notice of which has been given specifying the intention to propose the resolution as a special resolution, that is passed by a majority of at least three-fourths of the members or delegates of a co-operative society who voted at a general meeting with respect to that resolution; or

(b) at least ten days’ notice of which has been given that is approved by written affirmative vote of at least three-fourths of the members of the co-operative society who

(i) voted on that resolution within the prescribed time and in the prescribed manner;

(ii) cast a written vote in the manner and within the time ecified in the notice; or

(iii) that is consented to in writing by all of the members or delegates of the co-operative society who are entitled to vote at a general meeting on that resolution; “stabilisation fund” means a facility to provide technical assistance, advice and limited financial assistance to credit unions that are experiencing solvency problems or are insolvent;

“statutory reserves” means the reserves established under section 125;

“tertiary co-operative society” means a co-operative society that is owned by an association of secondary co-operative societies;

“Tribunal” means the Co-operative Societies Appeals Tribunal established under section 195.

(2) In this Act

(a) a reference to the “Registrar” shall, in relation to a credit union, be construed as a reference to the Registrar of Credit Unions appointed under section 5 (2),

(b) a reference to the “Registrar” shall, in relation to a co-operative society other than a credit union, be construed as a reference to the Registrar of Co-operatives appointed under section 5(1),

(c) a reference to the “Minister” shall, in relation to a credit union, be construed as a reference to the Minister with responsibility for finance, and

(d) a reference to the “Minister” shall, in relation a co-operative society other than a credit union, be construed as a reference to the Minister with responsibility for co-operative societies.

3. Co-operative principles.

(1) For the purposes of this Act, a co-operative society conforms to cooperative principles if

(a) each member or delegate, other than in a secondary or tertiary cooperative society, has no more than one vote;

(b) no member or delegate is entitled to vote by proxy;

(c) its membership is open, voluntary and available without any artificial restriction or any unlawful basis of discrimination, to any person who can use its services and is willing to accept the responsibility of membership;

(d) its business is carried on primarily as an economic activity for the benefit of its members;

(e) its primary concerns are its institutional capacity and financial strength, including adequate reserves, retained earnings and internal systems designed to ensure continuous growth and service to members;

(f) it utilises any surplus or savings arising out of its operations

(i) to strengthen its business;

(ii) to provide or improve common services to its members;

(iii) for the payment of dividends on permanent ownership capital purchased by its members;

- (iv) among its members in proportion to the business done by each member with the co-operative society;
 - (v) to educate its members, employees, directors, committee members and the general public in the principles and techniques of economic and democratic cooperation; and
 - (vi) for non-profit, charitable, benevolent or cultural purposes;
 - (g) it pursues co-operation with other co-operative societies;
 - (h) it provides for continuing education and training; and
 - (i) it contributes to the social and economic development of its community.
- (2) A co-operative society shall conform to the co-operative principles set out in section 3(1).

PART II

REGISTRATION OF CO-OPERATIVE SOCIETIES

4. Requirement for registration.

- (1) A person shall not carry on the business of a co-operative society unless it is registered in accordance with this Act.
- (2) A person who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable on conviction to a fine not exceeding one hundred thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding three years.

5. Registrar.

- (1) Subject to subsection (2), there shall be a Registrar of Co-operative Societies who shall be a public officer appointed by the Public Service Commission and whose duty shall be to regulate co-operative societies.
- (2) For the purposes of regulating credit unions, there shall be a Registrar of Credit Unions who shall be appointed by the Financial Services Regulatory Commission.
- (3) The Registrar shall be assisted by professional and administrative staff, and may delegate duties to any other person or agent under his or her control as is necessary to enable the Registrar to perform his or her regulatory duties and to exercise the powers conferred on the Registrar under this Act.
- (4) The Registrar shall
- (a) register all viable co-operative societies;
 - (b) inspect and monitor all co-operative societies;
 - (c) supervise and regulate all co-operative societies; and
 - (d) lead and manage the regulatory process.

6. Register.

The Registrar shall

- (a) in the case of co-operative societies other than credit unions, keep and maintain a register to be known as the "Register of Co-operative Societies" in which shall be recorded the details of all co-operative societies registered under this Act; or
- (b) in the case of credit unions, keep and maintain a register to be known as the "Register of Credit Unions" in which shall be recorded the details of all credit unions registered under this Act.

7. Registrar's regulatory powers.

- (1) Where
- (a) after an examination of a co-operative society or on the receipt of any information, the Registrar is of the opinion that the funds of the co-operative society are not being properly managed or protected; or

(b) the Registrar has reason to believe that a co-operative society is likely to take any action that would affect the financial soundness of the co-operative society, the Registrar may

(i) by notice in writing, direct the Board within such period as the Registrar may specify, to cease such action or such practice as the Registrar may specify or to take such measures as the Registrar considers necessary to protect the funds of the cooperative society or the interests of the co-operative society's members; and

(ii) place a co-operative society under administrative supervision and appoint a person who in the Registrar's opinion, has the necessary experience and training to supervise or advise the co-operative society on the action to be taken to remedy the situation.

(2) A person appointed under subsection (1)(b)(ii) shall hold office for a period not exceeding twelve months and on such terms as the Registrar shall specify.

(3) A person appointed under subsection (1)(b)(ii) may be paid such remuneration as the Registrar may determine, and such remuneration, and any other expenses of and incidental to the appointment, shall be defrayed out of the funds of the co-operative society.

(4) Notwithstanding sections 23 and 227 of this Act, where it appears to the Registrar that a requirement in this Act, the Regulations or the bye-laws is being contravened, but the circumstances are not such as to justify the taking of action under sections 23 or 227, the Registrar may give such directives to the co-operative society or person, as seems appropriate.

(5) A director, committee member, employee or agent of a co-operative society shall at all times give all information required by a person appointed under subsection (1)(b)(ii), for the full and satisfactory performance of his or her duties; and for this purpose section 186 shall apply as if any reference therein to the Registrar included a reference to a person appointed under subsection (1)(b)(ii).

(6) A person appointed under subsection (1)(b)(ii) shall report to the Registrar, in such manner and with such frequency as the Registrar may direct, on the affairs of the cooperative society.

(7) A co-operative society or a person that is required to take any action under this section, may within twenty-one days of the service of the notice by the Registrar, make representation in writing to the Registrar as to why the action required should not be taken.

(8) Where the co-operative society fails to comply with the notice referred to in subsection (1)(b)(i), after giving the Board the opportunity to be heard in a general meeting called by the Registrar for the purpose, the Registrar may

(a) remove from office; or

(b) suspend from office for such period as the Registrar considers appropriate, all or any of the directors of the co-operative society and direct that the co-operative society be managed by such persons as he may appoint for a period not exceeding fifteen months.

(9) Where a director is suspended under this section, the remaining directors shall be regarded as constituting the Board.

(10) Where all the directors are removed under this section, persons appointed under this section shall exercise all the powers and perform all the functions of a duly constituted Board and shall make arrangements prior to the end of their term of management for the election of a new Board in accordance with the bye-laws of the co-operative society.

8. Power to issue guidelines.

(1) The Registrar may, after consultation with co-operative societies, issue guidelines in respect of

(a) prudential standards to be observed by co-operative societies to ensure the safety and soundness of the funds of co-operative societies;

- (b) the management and investment of the funds of co-operative societies;
- (c) the calculation and management of doubtful and delinquent loans;
- (d) self insurance arrangements;
- (e) anti-money laundering and combating the financing of terrorism; and in the case of credit unions, the guidelines issued under this subsection shall be consistent with International Credit Union and Safety and Soundness Principles or standards prescribed.

(2) Where the Registrar intends to make any substantive modification to the guidelines, the Registrar shall consult with co-operative societies.

(3) The Registrar shall

(a) make the guidelines and all amendments to the guidelines available for inspection by the public; and

(b) on payment of any prescribed fee, provide copies of the guidelines and all amendments thereto to the public.

(4) The Registrar shall, at such intervals as the Registrar determines, review any guidelines for the time being in force.

(5) The Registrar shall publish the guidelines issued under this section and any amendment to the guidelines in the Gazette.

9. Certificate of Registrar.

(1) The Registrar may issue a person with a certificate stating that

(a) a document required to be sent to the Registrar has or has not been received by the Registrar;

(b) a name, whether that of a co-operative society or not, is or is not on the Register; and

(c) a name, whether that of a co-operative society or not, was or was not on the Register on a stated date.

(2) An officer authorised by the Registrar may sign a certificate issued under this section.

(3) The signature required under subsection (2) may be printed or mechanically reproduced on the certificate.

(4) A certificate mentioned in subsection (2) is admissible in evidence as conclusive proof of the facts stated in the certificate without proof of the office or signature of the person purporting to have signed the certificate.

10. Power to refuse documents.

(1) The Registrar may refuse to receive, file or register any document that in his or her opinion

(a) contains any matter contrary to law;

(b) has not, by reason of any omission or error in description, been properly completed;

(c) does not comply with the requirements of this Act;

(d) contains any error, alteration or erasure;

(e) is not legible; or

(f) is not durable.

(2) The Registrar may request in respect of a document refused under subsection (1)

(a) that it be amended or completed and resubmitted; or

(b) that a new document be submitted in its place.

11. Verification of documents.

The Registrar may require that a document or information contained in a document required by this Act or the Regulations to be sent to the Registrar be verified by affidavit or otherwise.

12. Application for registration.

(1) Subject to subsection (2), an application for registration of a co-operative society under this Part shall be submitted to the Registrar

(a) in the case of a co-operative society other than a credit union, in the prescribed form;

(b) in the case of a credit union, as specified in Schedule 2.

(2) An application under subsection (1) shall be signed

(a) in the case of a co-operative society of which no member is registered as a co-operative society, by at least one-third of the total membership of the co-operative society;

(b) in the case of a co-operative society where not all members of the cooperative society are registered co-operative societies, by at least three-quarters of the total membership of the co-operative society; and

(c) in the case of a co-operative society where all the members are registered as co-operative societies, on behalf of at least two such co-operative societies.

(3) An application under subsection (1) shall be accompanied by

(a) three copies of the proposed bye-laws of the co-operative society;

(b) in the case of a co-operative society other than a credit union, the prescribed application fee;

(c) in the case of a credit union, the fees specified in Schedule 3; and

(d) such other information in respect of the co-operative society as the Registrar may require.

13. Content of and amendment to bye-laws.

(1) A co-operative society shall include in its bye-laws provisions

(a) respecting its objects, core business and conditions of membership, including

(i) the rights of joint members, if any;

(ii) the qualification for membership, the withdrawal of members and the transfer of membership;

(iii) the amount of the membership fee and the annual subscription, if any, to be paid by members;

(iv) the conditions on which membership ceases or may be terminated, the disposition that may be made on cessation or termination of a member's interest and the determination of the value of the member's interest; and

(v) the minimum value of equity shares that may be held by each member;

(b) respecting voting rights and the rights of making, amending and repealing bye-laws, the right of a member to vote by ballot and the manner, form and effect of votes at meetings;

(c) respecting the quorum for meetings;

(d) respecting directors, officers and members of committees

(i) their qualifications, terms of office and removal;

(ii) the filling of vacancies; and

(iii) their powers and duties;

(e) respecting the address of the co-operative society;

(f) respecting the distribution of the property of the co-operative society on dissolution;

(g) respecting the borrowing powers of the co-operative society and the procedure for exercising those powers; and

(h) respecting any matters, in addition to those set out in paragraphs (a) to (g) that the members may consider necessary or desirable.

(2) Subject to subsection (3), where the bye-laws require a greater number of votes of directors or members than that required by this Act to effect any action, the byelaws shall prevail.

(3) The bye-laws may not require a greater number of votes of members to remove a director than the number required for a special resolution.

(4) The members of a co-operative society may, at an annual general meeting or a special meeting, amend the bye-laws by special resolution if notice of the proposed amendment together with notice of the meeting

(a) is sent by mail to the members, at the addresses given in the register of members; or

(b) is published in not less than two issues of a newspaper published and circulated in Saint Christopher and Nevis, or by posting the notice in a place or through a medium of communication that, as stipulated in the bye-laws and in the opinion of the Board, is prominent and accessible to members.

(5) An amendment to the bye-laws shall be submitted by the co-operative society to the Registrar for registration in accordance with subsection (6) and no amendment shall be valid until it has been registered.

(6) An application to register an amendment of the bye-laws shall be accompanied by three copies of the amendment certified to be true copies by the secretary and president of the co-operative society together with a copy of the resolution.

(7) On being satisfied that an amendment of the bye-laws is not contrary to this Act, the Regulations or the guidelines, the Registrar shall register the amendment.

(8) On registration of an amendment of the bye-laws of a co-operative society, the Registrar shall send to the co-operative society a certified copy of the amendment, which shall be conclusive evidence of the fact that the amendment has been duly registered.

(9) If the Registrar refuses to register an amendment

(a) the Registrar shall notify the co-operative society in writing of the refusal, the reasons for the refusal and of the co-operative society's right to appeal under paragraph (b); and

(b) the co-operative society may, within twenty-one days of the notice of refusal, appeal to the Tribunal.

14. Effect of bye-laws.

The bye-laws of a co-operative society, when registered, binds the co-operative society and its members to the same extent as if they

(a) had been signed and sealed by the co-operative society and by every member; and

(b) contained covenants on the part of each member and the legal representative of each member to observe the bye-laws.

15. Conditions for registration.

(1) A co-operative society shall not be registered, or having been registered, shall not continue to be registered under this Part

(a) unless its membership consists

(i) in the case of a credit union, of not less than one hundred members;

(ii) in the case of any other co-operative society, of not less than fifteen members;

(b) unless it is economically viable and has provision for equity capital expansion and continuous business growth;

(c) unless there is conformity among its membership with all the cooperative principles as set out in section 3;

(d) unless the word "Co-operative" or "Credit Union" as the case may be forms part of the name of the co-operative society, and, in the case of a co-operative society registrable under subsection (2), the words "Junior Cooperative" forms part of the name of the co-operative society;

(e) in the case of a co-operative society to be registered with limited liability

(i) unless the word "Limited" is the last word of the name of the co-operative society; and

- (ii) in the case of a primary co-operative society, unless each member of the primary co-operative society is a shareholder and has one vote in the democratic proceedings of the cooperative society;
 - (f) if the name of the co-operative society is identical to that of another co-operative society or so nearly resembles the name of another cooperative society as to be likely to mislead the members of the public as to its identity;
 - (g) unless it has and maintains an address in Saint Christopher and Nevis to which all notices and communications may be sent;
 - (h) unless its bye-laws conform to this Act;
 - (i) unless it complies with the guidelines issued under section 8;
 - (j) unless its policies in respect of shares, loans, deposits and investments are documented and comply with this Act; and
 - (k) unless, within sixty days after the issue of the certificate of registration, the co-operative society paints or affixes its registered name in letters that are easily legible in a conspicuous position on the outside of the place where the business of the co-operative society is carried on;
 - (l) unless it has commenced business within ninety days of its registration under this Act;
 - (m) unless it complies with the law in force in Saint Christopher and Nevis relating to anti-money laundering, proceeds of crime and antiterrorism.
- (2) The Registrar may register as a junior co-operative a co-operative society whose membership consists solely of members of a school, club or cultural organisation who are under the age of sixteen years.
- (3) In the determination of the viability of an applicant or existing co-operative society the Registrar may have regard to
- (a) the demand for the proposed or current services;
 - (b) the capital base of the co-operative society;
 - (c) the co-operative society's membership and business size, growth and growth potential; and
 - (d) the capacity of the co-operative society to sustain management and audit costs.
- (4) A registered cooperative society shall implement suitable measures, procedures and policies to counter money laundering and to combat the financing of terrorism.
- (5) Notwithstanding the generality of subsection (4), every registered cooperative society shall, in addition to complying with the provisions of this Act and Regulations made under this Act, also comply with the following:
- (a) any relevant provisions of the Anti-money Laundering Regulations made under the Proceeds of Crime Act, Cap. 4.28;
 - (b) any relevant provisions of the Anti-Terrorism Act, Cap. 4.02; and
 - (c) any relevant provisions of the Financial Services Regulatory Commission Act, No. 22 of 2009;
 - (d) any other relevant financial services legislation promoting good governance, financial accountability and made to safeguard against money laundering and financing of terrorist activity.

16. Registration of co-operative societies.

- (1) Where the Registrar is satisfied that an application has been made in accordance with this Act, the Registrar shall, within three months of the receipt of the application, register the co-operative society and its bye-laws and issue the co-operative society with a certificate of registration in the prescribed form.
- (2) The name under which a co-operative society is registered under this Act shall be published in the Gazette and shall be noted in the Register.

(3) Where the Registrar refuses to register a co-operative society, the Registrar shall give the applicant reasons in writing for the refusal.

17. Effect of certificate of registration.

(1) Except for a co-operative society that is to be taken to be registered under section 250, a co-operative society comes into existence on the date shown in its certificate of registration.

(2) A certificate of registration issued by the Registrar to a co-operative society is conclusive proof that the co-operative society named in the certificate is registered under this Act and has complied with all the requirements of registration under this Act.

18. Capacity as body corporate.

The registration of a co-operative society renders it a body corporate and, subject to this Act and its bye-laws, it shall have the capacity, rights, powers and privileges of a body corporate in accordance with the Interpretation Act, Cap 1.02.

19. Prohibition on carrying on business contrary to bye-laws and law.

A co-operative society shall not

- (a) carry on a business or exercise a power that is restricted or prohibited by its bye-laws or by any law in force in Saint Christopher and Nevis; or
- (b) exercise any of its powers in a manner contrary to its bye-laws.

20. Registered office.

(1) A co-operative society shall at all times establish and maintain a registered office and the address of such office shall be specified in the bye-laws.

(2) Subject to subsection (3), the directors of a co-operative society may change the address of the registered office.

(3) A co-operative society shall inform the Registrar of an intention to change the address of its registered office at least one month prior to the change being made.

21. Maintenance of mandatory records.

(1) A co-operative society shall display its certificate of registration at its registered office at all times.

(2) A co-operative society shall make available at all reasonable times at its registered office

- (a) a copy of this Act and the Regulations;
- (b) a copy of its bye-laws;
- (c) the register of members;
- (d) the minutes of all meetings and resolutions of its members;
- (e) copies of all notices of directors and notices of change of directors;
- (f) a register of its directors setting out the names, addresses and occupations of all persons who are or have been directors of the cooperative society with the dates on which each person became or ceased to be a director;
- (g) a copy of every certificate issued to it by the Registrar;
- (h) a copy of every order of the Registrar relating to the co-operative society;
- (i) a copy of the monthly financial statements of the co-operative society;
- (j) a copy of the shares transfer register and investment reports; and
- (k) the minutes of all meetings and resolutions of its directors and committees.

22. Inspection and access to records.

- (1) The Registrar may, during the normal business hours of a co-operative society, observe practices, monitor operations and inspect or authorise the inspection of the co-operative society, including any of the records listed in section 21(2).
- (2) Members of a co-operative society, their agents and their legal representatives may, during the normal business hours of the co-operative society, examine any of the records specified in section 21(2)(a) to (h) and the returns specified in section 147.

23. Suspension and cancellation of registration.

- (1) The Registrar may by order in writing suspend the registration of a cooperative society for a period not exceeding twelve months if the Registrar is satisfied that
 - (a) the co-operative society is in breach of any condition of registration;
 - (b) the co-operative society is in breach of any requirement of sections 4 or 15;
 - (c) the co-operative society or any officer of the co-operative society has failed or refused to comply with any obligation imposed by, or any requirement of this Act, Regulations made under this Act or its bye-laws;
 - (d) the Registrar has not received from the co-operative society any return notice or other document or fee required by this Act or the Regulations to be sent to it; or
 - (e) the co-operative society has failed to comply with any directive given by the Registrar under sections 7 or 8.
- (2) The Registrar may by order in writing cancel the registration of a cooperative society if
 - (a) the co-operative society does not commence business within ninety days of its registration under this Act;
 - (b) the number of members has been reduced to less than the number required for the registration of the co-operative society;
 - (c) the registration has been obtained by fraud or mistake; or
 - (d) the co-operative society has not within a period of suspension under subsection (1) rectified the reason for its suspension.
- (3) The Registrar shall by order in writing cancel the registration of a cooperative society if
 - (a) the co-operative society gives notice to the Registrar that it has ceased to carry on business;
 - (b) the co-operative society is dissolved;
 - (c) the co-operative society is amalgamated with one or more other cooperative societies or bodies corporate; or
 - (d) the co-operative society is bankrupt within the meaning of the Bankruptcy Act, Cap. 5.04, but a co-operative society which includes among its members one or more registered co-operative societies may not have its registration cancelled under paragraph (a).
- (4) An order under subsections (1), (2) or (3) shall take effect from the date of the order.
- (5) The Registrar shall not make an order under subsections (1), (2) or (3) until the Registrar has given the co-operative society an opportunity to be heard.
- (6) Immediately after the Registrar has suspended or cancelled the registration of a co-operative society, the Registrar shall publish a notice of the suspension or cancellation in -
 - (a) the Gazette;
 - (b) not less than two issues of a newspaper published and circulated in Saint Christopher and Nevis; and
 - (c) any other appropriate medium of communication that, in the opinion of the Registrar is prominent and accessible to the public.
- (7) Where the registration of a co-operative society is cancelled by order under this section or any other section the co-operative society shall, except for the purpose of winding up, cease to exist as a body corporate from the date on which the order takes effect.

24. Seal.

- (1) The Board may by resolution
 - (a) adopt an official seal;
 - (b) change the official seal adopted under paragraph (a); and
 - (c) determine which of its directors, officers or agents shall sign instruments to which the official seal is affixed.
- (2) An instrument of agreement executed on behalf of a co-operative society by a director, an officer or an agent of the co-operative society is not invalid merely because an official seal is not affixed to it.

25. Pre-registration contracts.

- (1) Except as provided in this section, a person who enters into a written contract in the name of or on behalf of a co-operative society before it comes into existence is personally bound by the contract and is entitled to the benefits of the contract.
- (2) Within a reasonable time after a co-operative society comes into existence, it may, by any action or conduct signifying its intention to be bound thereby, adopt a written contract made in its name or on its behalf, before it came into existence.
- (3) Subject to subsection (4) and (5), where a co-operative society adopts a contract under subsection (2)-
 - (a) the co-operative society is bound by the contract and is entitled to the benefits thereof as if the co-operative society had been in existence at the date of the contract and had been a party to it; and
 - (b) a person who purported to act in the name of the co-operative society or on its behalf ceases to be bound by or entitled to the benefits of the contract.
- (4) Except as provided in subsection (5), whether or not a written contract made before the coming into existence of a co-operative society is adopted by the co-operative society, a party to the contract may apply to a court for an order fixing the obligations under the contract as joint or joint and several, or apportioning liability between or among the cooperative society and a person who purported to act in the name of the co-operative society or on its behalf; and the court may upon the application make any order it thinks fit.
- (5) If expressly so provided in a written contract, a person who purported to act for or on behalf of the co-operative society before it came into existence shall not be bound by the contract or entitled to the benefits of the contract.

PART III**MEMBERSHIP AND MEETINGS****26. Application and qualification for, and limitations on, membership.**

- (1) An application for membership of a co-operative society shall be submitted to the Board in such form as the Board may approve.
- (2) In order to qualify for the membership of a co-operative society, a person, other than a registered co-operative society-
 - (a) shall be a citizen or resident of Saint Christopher and Nevis;
 - (b) shall be a citizen of another CARICOM Member State;
 - (c) shall not be an undischarged bankrupt;
 - (d) shall not be of unsound mind; and
 - (e) except in the case of a junior co-operative, shall be sixteen years of age or over.
- (3) Where the co-operative society is a credit union, an individual who is over sixteen years of age but who has not yet attained the age of eighteen years may be admitted as a

member and subject to subsection (4) and (5) may enjoy all the rights of membership and be subject to all the liabilities of membership.

(4) Where a member referred to in subsection (3) is required to execute any instrument or give any receipt, he or she may only do so by his or her parent or guardian.

(5) A member of a co-operative society who has not attained the age of eighteen years may not obtain credit from a co-operative society of which he or she is a member.

(6) The Board shall cause each applicant for membership to be notified in writing that his or her application has been approved or disapproved.

(7) Subject to subsection (8), a person may be a member of more than one co-operative society if-

(a) the person has disclosed in his or her application for membership of a co-operative society the name of any other co-operative society of which the person is a member; and

(b) the co-operative societies both have as a primary object the granting of loans to their members and the person has fully disclosed to the first co-operative society that he or she has applied for membership of the second co-operative society.

(8) A person who is a member of a credit union shall not apply for membership of another credit union unless his or her application is accompanied by the written consent of the credit union of which he or she is already a member to his or her proposed dual membership.

(9) Where a person becomes a member of more than one credit union, the Secretary or Manager of the second or subsequent credit union shall so inform the Registrar within fourteen days of the grant of membership.

27. Joint accounts.

Subject to the bye-laws, where individuals have separate and independent membership in a co-operative society, joint accounts may be held.

28. Membership fees and membership register.

(1) A person shall not exercise the rights of membership of a co-operative society unless the person has paid the prescribed membership fee and has satisfied any other requirement which may be specified in the bye-laws.

(2) A co-operative society shall keep a register of members in which shall be recorded

(a) the names and addresses of its members; and

(b) the date on which a person becomes a member and the date, if any, on which the person ceases to be a member; and

(c) such other details as may be prescribed.

29. Liability of past and present members.

(1) Subject to this Act, the liability of a current member of a co-operative society is limited to the unpaid amount of his or her subscription for shares.

(2) The liability of a past member or the estate of a deceased member for debts of a co-operative society as they existed on the date on which the member ceased to be a member or died continues for a period of two years after the cessation of membership or death.

30. Withdrawal of membership.

(1) A member of a co-operative society may at any time withdraw from membership of the co-operative society in such a manner as may be prescribed by the byelaws or the Regulations.

(2) Withdrawal of membership from a co-operative society shall be by written notice addressed to the Board.

(3) Withdrawal of membership from a co-operative society shall not affect any existing liability of the member to the co-operative society.

31. Termination of membership by Board.

(1) Subject to the bye-laws, the Board may, by a vote of at least two-thirds of the directors present at a meeting called for the purpose, order the termination of membership of a member of a co-operative society.

(2) Where the Board terminates the membership of a member under this section

(a) the Board shall

(i) within a period of one year, purchase from the member at par value all shares in the co-operative society held by the member; and

(ii) pay to the member all amounts held to the member's credit, together with any interest accrued on those amounts and the amount outstanding on loans made to the co-operative society by the member with any interest accrued on those amounts;

(b) the secretary of the co-operative society shall, within ten days from the date on which the order is made, notify the member of the order in writing;

(c) the member may appeal from the order to the next general meeting of the co-operative society by giving written notice of his or her intention to appeal to the secretary within thirty days from the date the member received notice of the order under paragraph (b); and

(d) the member appeals under paragraph (c), a majority or any greater percentage that may be specified in the bye-laws, of the members present at the general meeting shall confirm or rescind the order.

(3) Where the address of a member the termination of whose membership is ordered under subsection (1) is unknown to the co-operative society after all reasonable efforts have been made to ascertain the member's address for the purpose of making payment to him or her of all amounts held to his or her credit, the co-operative society shall transfer those amounts to its statutory reserves.

(4) Where any amounts are transferred under subsection (3), the co-operative society shall pay those amounts to the person entitled to them on proof of the person's claim that is satisfactory to the co-operative society.

(5) Where a co-operative society transfers amounts held to the credit of a member under subsection (3), it shall immediately submit to the Registrar a return showing

(a) the member's name;

(b) the member's last known address; and

(c) the amounts transferred.

32. Termination of membership by members.

Members may terminate the membership of a member where

(a) the member has received at least ten days notice of the general meeting at which his or her membership is to be considered; and

(b) the termination is approved by a majority of at least two-thirds of the members who

(i) are present at the general meeting; and

(ii) cast votes on the resolution.

33. Suspension of membership.

Subject to the bye-laws, the Board may by notice in writing suspend a member for a period not exceeding three months if they are satisfied that the member is guilty of misconduct.

34. Appeal.

(1) Subject to subsection (2), where a person's membership is terminated under section 31 or 32, or suspended under section 33, the person may appeal against the termination or suspension to the Registrar in the prescribed manner and the Registrar shall confirm or set aside the resolution terminating or suspending the membership.

(2) A person whose membership is terminated for failure to pay fees, assessments, rent or occupancy charges or to fulfil other financial obligations to the cooperative society is not eligible to appeal against the termination of his or her membership to the Registrar under subsection (1).

(3) Where a person appeals against the termination of his or her membership under section 31(2)(c) or this section, notwithstanding the resolution terminating his or her membership, the person continues to be a member until the termination of his or her membership is confirmed by the meeting of members under section 31(2)(d) or by the Registrar under this section.

35. Re-admittance.

A person whose membership is terminated under section 31 or 32 may be readmitted to membership only by a two-thirds majority vote of members present and voting at a general meeting.

36. Voting rights of a member who is not an individual.

A co-operative society that is a member of another co-operative society shall exercise its voting rights in that other co-operative society through one of its members duly appointed in that behalf as a delegate under section 49.

37. Representatives of member who is not an individual.

(1) Where a co-operative society is a member of another co-operative society, the latter co-operative society shall recognise any individual authorised by a resolution of the directors of the former co-operative society to represent it at meetings of the latter cooperative society.

(2) An individual authorised under subsection (1) may exercise, on behalf of the co-operative society, all the powers of that co-operative society as if it were an individual member.

38. Voting procedure.

(1) Subject to the bye-laws, members shall vote

(a) by a show of hands; or

(b) where the majority of the members entitled to vote at a meeting so demands, by secret ballot.

(2) The chairperson of a meeting has the right to vote, and in the event of a tie he or she is entitled to a second or casting vote.

(3) Subject to this Act and the bye-laws, a majority of the members who are present and cast votes at a meeting shall decide all questions.

39. Place of meetings.

General meetings of members shall be held in Saint Christopher and Nevis or, in the case of co-operative societies of a regional or international nature, within the defined geographical area of the co-operative society's lawful operations

(a) at the place provided in the bye-laws; or

(b) where the bye-laws contain no provision, at the place determined by the Board.

40. Members not to exercise rights until due payment.

A member shall not exercise the rights of a member unless the member has made payment to the co-operative society in respect of membership or acquired an interest in the co-operative society as specified in the bye-laws of the co-operative society or as prescribed.

41. First general meeting.

(1) This section does not apply to a co-operative society if it is taken to be registered under section 250.

(2) Within two months of the date of its registration, a co-operative society shall hold a general meeting at which all members are entitled to be present and to vote.

(3) Notwithstanding subsection (2), where the Board applies to the Registrar, the Registrar may extend the time for holding the general meeting.

(4) The business at the general meeting mentioned in subsection (2) shall include

- (a) the adoption of the bye-laws;
- (b) the adoption of forms of share certificates and records of the cooperative society;
- (c) the authorising of the issue of shares;
- (d) the appointment of an auditor to hold office until the next annual general meeting;
- (e) the making of banking arrangements; and
- (f) the transaction of any other business.

42. Annual general meetings.

(1) A co-operative society shall hold an annual meeting in each year not later than three months after the end of the financial year of the co-operative society.

(2) Notwithstanding subsection (1), where the Registrar receives a written request from the Board of a co-operative society prior to the expiration of the period of three months referred to in subsection (1), the Registrar may authorise the co-operative society to hold the annual general meeting at any date not later than

- (a) six months; or
- (b) such other period as the Registrar may determine based on the circumstances, after the end of the financial year of the co-operative society that it considers appropriate.

(3) The bye-laws may provide for holding semi-annual or other periodic meetings.

43. Special general meeting.

(1) The Board may call a special general meeting of the members of a cooperative society at any time.

(2) Subject to subsection (3), the Board shall call a special general meeting of the members on receipt of a written request, specifying the purpose of the meeting, from such number of members as may be specified in the bye-laws.

(3) The Board shall call the special general meeting mentioned in subsection (2) within twenty days of their receipt of the request and the special meeting shall dispose of the business specified in the request.

(4) The Registrar may call a special general meeting of the co-operative society

(a) for the purpose of reporting to the members the results of any audit, examination or other investigation of the co-operative society's affairs ordered or made by the Registrar, or

(b) where the co-operative society fails to hold an annual general meeting in accordance with section 42(1) or (2), for the purpose of enabling members to secure any information regarding the affairs of the cooperative society that they are entitled to receive under this Act and to deal with any matters affecting the co-operative society.

44. Meeting called by Registrar.

(1) Where

(a) in the opinion of the Board it is impracticable

(i) to call a general meeting of members in the manner in which meetings of members may be called; or

(ii) to conduct a general meeting of members in the manner prescribed in this Act or in the bye-laws; or

(b) for any reason, in addition to those described in paragraph (a), the Registrar considers appropriate, the Registrar on his or her own initiative may, if satisfied that such a meeting is warranted in the circumstances, order a general meeting to be called, held and conducted in any manner that the Registrar may direct.

(2) Without restricting the generality of subsection (1), the Registrar may order that the quorum required in this Act or the bye-laws be varied or dispensed with at a general meeting called under this section.

(3) A general meeting called under this section shall be a valid general meeting.

45. Resolution in lieu of meeting.

(1) Except where a written statement is submitted by an auditor under section 142

(a) a resolution in writing signed by the number of members entitled to vote on that resolution at a general meeting of members as may be specified in the bye-laws is as valid as if it had been passed at a general meeting of the members; and

(b) a resolution in writing dealing with any matter required by this Act

to be dealt with at a general meeting of members and signed by all the members entitled to vote at that meeting

(i) satisfies all the requirements of this Act relating to meetings of members; and

(ii) subject to subsection (2), is effective from the date specified in the resolution.

(2) The effective date of a resolution described in subsection (1)(b)(ii) shall not be earlier than the date on which the first member signed the resolution.

(3) A copy of every resolution described in subsection (1) shall be kept with the minutes of the meetings of members.

46. Notice of meetings.

(1) A co-operative society shall give at least ten days notice of any annual meeting or special meeting to its members

(a) by sending the notice by mail to the members, at the addresses given in the register of members; or

(b) by publishing the notice in not less than two issues of a newspaper published and circulated in Saint Christopher and Nevis, or by posting the notice in a place or through a medium of communication that, as stipulated in the bye-laws and in the opinion of the Board, is prominent and accessible to members.

(2) Notwithstanding any other provision of this Act, where a co-operative society is required to send a statement, agreement, proposal or other document to its members with a notice of a meeting and decides to insert the notice of a meeting in a newspaper under paragraph (1)(b), the co-operative society shall

(a) in the notice, inform the members of the document, giving a description of the document that, in the opinion of the Board, is adequate to describe its nature; and

(b) make a copy of the document available to any member or delegate who requests it.

(3) The notice of any special meeting shall specify the purpose for which the meeting is being called.

(4) The proceedings or the business transacted at a general meeting shall not be invalidated by reason only of the non-receipt by a member of notice of the meeting.

47. Fixing of record date.

- (1) Subject to subsection (2), for the purpose of determining members
 - (a) entitled to receive payment of a bonus or dividend;
 - (b) entitled to participate in a distribution on liquidation; or
 - (c) for any purpose in addition to that described in paragraph (a) or (b), except the right to receive notice of or to vote at a general meeting, the Board may fix in advance a date as the record date for the determination of members.
- (2) The record date mentioned in subsection (1) shall not precede, by more than 30 days, the particular action to be taken.
- (3) Subject to subsection (4), for the purpose of determining members entitled to receive notice of a general meeting, the Board may fix in advance a date as the record date for the determination of members.
- (4) The record date mentioned in subsection (3) shall not precede, by more than fifty days or by less than eleven days, the date on which the meeting is to be held.
- (5) Where the Board does not fix a record date
 - (a) the record date for the determination of members entitled to receive notice of a general meeting shall be
 - (i) the close of business on the day immediately preceding the day on which the notice is given; or
 - (ii) if no notice is given, the day on which the meeting is held; and
 - (b) the record date for the determination of members for any purpose other than that described in paragraph (a) shall be at close of business on the day on which the Board passes a resolution relating to that purpose.

48. Quorum.

- (1) Subject to subsection (2), the quorum at any annual general or special meeting of members shall be that specified in the bye-laws.
- (2) Except where all the members are directors, the number of members present at an annual meeting, general meeting or special meeting shall not be less than the number of directors plus three.
- (3) Subject to the bye-laws, where a quorum is present at the opening of a general meeting of members the members present may proceed with the business of the meeting.
- (4) Where a quorum is not present sixty minutes after the time fixed for the commencement of a general meeting of members
 - (a) the members present may postpone the meeting to a time and place to be determined by the Board but not later than thirty days after the date of the postponed meeting and may not transact any other business;
 - (b) the Registrar or the Registrar's representative may direct that the meeting proceeds if the Registrar is satisfied that the meeting was convened in accordance with the Act and that the members present were properly notified and constitute at least seventy five per cent of the amount required for a quorum.
- (5) If at the postponed meeting there is no quorum the members present constitute a quorum and may proceed with the meeting.

49. Delegates.

- (l) Where the bye-laws of a co-operative society provide for the nomination and appointment of delegates to a general meeting
 - (a) the delegates shall exercise the powers of membership at any annual or special meeting; and
 - (b) any reference in this Act with respect to the exercise of any power mentioned in paragraph (a) shall be construed as a reference to delegates.

- (2) The members who elect delegates may, at a special meeting called for the purpose or at any annual meeting
 - (a) remove the delegates in any manner provided for in the bye-laws; and
 - (b) notwithstanding subsection (1), amend the bye-laws to eliminate the nomination and appointment of delegates.

50. Notice of motion.

- (1) A member who is entitled to vote at an annual meeting of members may
 - (a) submit to the co-operative society a notice of motion with respect to any matter that he or she proposes to raise at the meeting; and
 - (b) discuss at the meeting any matter with respect to which he or she would have been entitled to submit a notice of motion.
- (2) Where a member submits a notice of motion and requests the co-operative society to send the notice of motion with the notice of the meeting at which the motion is to be presented or make the notice of motion available to all members entitled to attend and vote at that meeting, the co-operative society shall comply.
- (3) Where a member submits a notice of motion and requests the co-operative society to include in or attach to the notice of motion
 - (a) a statement by the member of not more than two hundred words in support of the motion; and
 - (b) the name and address of the member, the co-operative society shall comply.
- (4) A co-operative society is not required to comply with subsections (2) and (3) where
 - (a) the notice of motion is not submitted to the co-operative society at least forty-five days before the anniversary date of the previous annual general meeting of members;
 - (b) in the opinion of the directors, the notice of motion is submitted by the member primarily for the purpose of
 - (i) enforcing a personal claim or redressing a personal grievance; or
 - (ii) promoting general economic, political, racial, religious, social or similar causes;
 - (c) the co-operative society, at the member's request, included a notice of motion in a notice of a meeting of members held within two years preceding the receipt of the notice of motion submitted under subsection (1), and the member failed to present the notice of motion at the meeting;
 - (d) substantially the same notice of motion was submitted to members in the notice of a meeting of members held within two years preceding the receipt of the members request, and the notice of motion was defeated; or
 - (e) in the opinion of the Board, the rights conferred by this section are being abused to secure publicity.
- (5) A member who requests that a notice of motion and any statement be sent with the notice of the meeting at which the motion is to be presented shall pay the cost of sending the notice of motion and statement, unless the members present at the meeting provide otherwise by a majority vote.
- (6) A co-operative society or a person acting on behalf of a co-operative society shall not incur any liability by reasons only of circulating a notice of motion or statement in compliance with this section.
- (7) Where a co-operative society refuses to include a notice of motion in a notice of a meeting, the co-operative society shall, within thirty days after receiving the proposal
 - (a) notify the member submitting the notice of motion of its intention to omit the notice of motion from the notice of the meeting; and
 - (b) send to the member a statement of the reasons for the refusal.
- (8) Where a member claiming to be aggrieved by a refusal under subsection

(7) applies to the Registrar, the Registrar may suspend the holding of the meeting to which the motion is sought to be presented and give any directions that it may consider appropriate.

(9) A co-operative society or a person claiming to be aggrieved by a notice of motion may apply for permission for the co-operative society to omit the notice of the meeting and, where the Registrar is satisfied that subsection (5) applies, the Registrar may give permission.

(10) In this section "notice of motion" means a notice of motion submitted to a co-operative society under subsection (1)(a).

51. Power to make bye-laws.

(1) Subject to this Act and the bye-laws, the members of a co-operative society may, at any annual meeting or any special meeting called for the purpose, make, amend, repeal, replace or confirm any bye-laws, where written notice of the proposed making, amendment, repeal, replacement or confirmation

(a) is forwarded to each member of the co-operative society with the notice of the meeting at which the making, amendment, repeal, replacement or confirmation is to be considered, by a majority of members present and voting at that meeting; or

(b) is not forwarded to each member of the co-operative society with the notice described in paragraph (a), by a three-fourths majority of members present and voting at the meeting.

(2) A member may make a proposal, in the manner provided in section 50, to make, amend, repeal, replace or confirm any bye-law.

52. Effective date of the bye-laws.

(1) Bye-laws shall not have any force or effect unless three copies of the byelaws, certified to be true copies by the president and secretary of the co-operative society, are filed with and approved by the Registrar.

(2) Subject to subsection (3), where proposed bye-laws are certified under subsection (1) and receives the members' approval required in section 51(1), the bye-laws shall have immediate force and effect.

(3) Bye-laws described in subsection (2) shall cease to have any force or effect on the expiration of sixty days after the date of the general meeting in which it is approved by the members, unless, within that sixty day period, the bye-laws are filed with the Registrar under subsection (1).

(4) Where the Registrar approves bye-laws, it shall return to the co-operative society one copy of the bye-laws with the approval of the Registrar stamped on the byelaws.

PART IV MANAGEMENT

53. Board of directors.

(1) A co-operative society shall be managed by a Board of directors which shall be constituted in accordance with this Act and the bye-laws of the co-operative society.

(2) The Board shall be constituted by not less than five or not more than thirteen directors, as specified in the bye-laws.

(3) The members of a co-operative society may amend the bye-laws to vary the number of directors, but no amendment to decrease the number of directors shall affect an incumbent director.

(4) A person who

- (a) has been sentenced by a Court in any country for an offence involving fraud or dishonesty and has not received a free pardon for that offence;
 - (b) is not in good financial standing with a co-operative society;
 - (c) has made an arrangement with his or her creditor which he or she is unable to honour;
 - (d) was a director of a failed co-operative society of the same type;
 - (e) has been convicted on indictment of an offence in connection with the promotion, formation or management of a body corporate;
 - (f) has been convicted of an offence under this Act;
 - (g) is of unsound mind and has been so found by a court in Saint Christopher and Nevis;
 - (h) is or becomes bankrupt;
 - (i) is under the age of eighteen years or, in the case of a junior cooperative, under the age of ten years;
 - (j) has not been a member of the co-operative society or a duly appointed representative of a member co-operative society for the past twelve months;
 - (k) is a member who has not transacted any business with the co-operative society for twelve consecutive months, or who represents a member co-operative society who has not transacted any business with the co-operative society for twelve consecutive months;
 - (l) is an employee of the co-operative society or of the Registrar, or is a partner or employee of the co-operative society's auditor, or of the apex body;
 - (m) holds less than the minimum level of equity shares in accordance with section 13(1)(a)(v); or
 - (n) is already part of the management of another co-operative society of the same type, may not constitute part of the management of a co-operative society, until his or her disability is removed, but he or she may retain his or her membership of the co-operative society during the period of such disability.
- (5) For the purposes of this Part "management" includes
- (a) a person who holds membership of the Board or any committee established by a co-operative society; and
 - (b) a person who is employed by the Board.
- (6) A person who knowingly holds membership of the Board or of a committee of a co-operative society, or who knowingly seeks employment with, or is employed or continues to be employed by a co-operative society whilst disqualified under this section commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding ten thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both.

54. Officers.

- (1) A co-operative society
 - (a) shall have a president, a vice-president, a treasurer and a secretary; and
 - (b) may have any officers in addition to those mentioned in paragraph (a) that are provided for in the bye-laws.
- (2) Subject to the bye-laws
 - (a) the Board may designate the officers of the co-operative society, appoint persons as officers, specify the officers' duties and delegate powers to manage the business and affairs of the co-operative society to them; and
 - (b) a director may be appointed as an officer of the co-operative society.
- (3) A person shall not be president, vice-president or treasurer of a cooperative society unless he is a director of the co-operative society.

55. Provisional directors and elected directors.

- (1) On the registration of a co-operative society, the individuals whose names appear in the application for registration as having been appointed and have consented to act as provisional directors
 - (a) shall have all the powers and perform the duties of directors; and
 - (b) shall hold office until the first general meeting.
- (2) At the first general meeting and at every annual general meeting the directors shall be elected in accordance with this Act, the Regulations made under this Act and the bye-laws.

56. Powers of Board.

Subject to this Act, the Regulations and the bye-laws, the Board shall

- (a) exercise the powers of the co-operative society directly, or indirectly through the employees and agents of the co-operative society;
- (b) ensure the good governance and direct the management of the business and affairs of the co-operative society; and
- (c) formulate and implement the policies of the co-operative society.

57. Committees generally.

- (1) The Board may establish committees for the more efficient management of various aspects of the business or affairs of the co-operative society.
- (2) A committee established under subsection (1) may consist of members of the Board and other members of the co-operative society.
- (3) No committee may
 - (a) fill vacancy among the directors;
 - (b) declare a bonus or a dividend;
 - (c) approve any financial statement of the co-operative society;
 - (d) submit to the members any question or matter requiring the approval of members; or
 - (e) make decisions where this Act or the bye-laws require a two-thirds majority or a unanimous vote of the Board.

58. Tenure of committees generally.

- (1) Committees appointed under section 57(1) shall hold office for a period not exceeding one year.
- (2) A committee member appointed under section 57(1) may be removed by resolution of the co-operative society or of the Board.
- (3) The removal of a committee member who is a director shall not affect his or her office as a director.
- (4) A committee shall
 - (a) fix its quorum at not less than a majority of its members;
 - (b) keep minutes of its proceedings; and
 - (c) submit to the Board at each meeting of the Board and to the annual general meeting of the co-operative society the minutes of the committee's proceedings since the most recent meeting of the Board or of the co-operative society.

59. Credit committee.

- (1) A credit union, central credit union and central co-operative society shall have a credit committee which shall be elected by its members at the annual general meeting.
- (2) A person shall not be elected to the credit committee if the person is not present at the meeting at which the election is held, unless the person tenders an excuse for his or her absence which is accepted by the majority of the members present.
- (3) The members of the credit committee shall hold office for such term as the bye-laws provide and until their successors are elected.

- (4) The credit committee shall consist of such number of members as may be fixed by the bye-laws, which shall be not less than three.
- (5) A person shall not be a member of the credit committee if that person is a member of the Board or of the supervisory and compliance committee or is an employee of the credit union, central credit union or central cooperative society; or has a delinquent loan with the credit union, central credit union or central co-operative society.
- (6) A majority of members of the credit committee shall constitute a quorum.
- (7) The election of members of the credit committee shall proceed in keeping with subsections (a) to (d) of section 72 (1).
- (8) Where a vacancy occurs in the credit committee, the Board may fill the vacancy until the next annual meeting of the credit union, central credit union or central cooperative society.
- (9) The bye-laws of the a credit union, central credit union or central cooperative society may provide for the election and retirement of members of the credit committee in rotation so that no member of the credit committee shall be elected for a term of more than three years but no person may serve as a member of the credit committee of a co-operative society for more than two consecutive terms or an aggregate of six successive years.

60. Duties of credit committee.

The credit committee shall

- (a) implement and ensure implementation of the approved loan policy;
- (b) provide prudent oversight of the loans portfolio;
- (c) make recommendations to the Board in respect of the loan policy of the credit union; and
- (d) perform such duties as may be prescribed under this Act, the Regulations and the bye-laws of the credit union.

61. Approval of loans.

- (1) The Board shall determine the terms and conditions under which the credit committee shall approve loans to members.
- (2) The credit committee may, upon such terms and conditions as the Board may specify, authorise the manager, loans manager or other employees of the credit union to approve loans to members.
- (3) A person authorised by the Board to approve loans under subsection (1) or (2) shall submit a written monthly report to the credit committee stating the number of loan applications received, the number of loans granted, the security, if any, obtained for such loans and any risks associated with those loans.
- (4) The responsibilities and duties of any person authorised to approve loans under subsection (2) are concurrent with the responsibilities and duties of the credit committee.

62. Credit committee reports.

- (1) The credit committee shall
 - (a) meet at least once every month;
 - (b) keep minutes of its meetings;
 - (c) submit a monthly report to the Board stating
 - (i) the number and category of loan applications;
 - (ii) the number and category of loans granted;
 - (iii) the security taken and risks for loans granted; and
 - (iv) applications denied, delinquent loans, classified loans, loans written off, watch listed accounts, large credit exposures and related party loans; and

(d) submit an annual report on the matters referred to in paragraph (c), and on the loan portfolio quality and trends, to the annual meeting of the credit union.

(2) The members of a credit union may, by special resolution in a special meeting called for the purpose, remove a credit committee which fails to comply with subsection (1)(c).

63. Removal of members of credit committee.

(1) The members of a credit union may, by resolution passed by two-thirds of the votes cast at a general meeting called for the purpose, remove a member of a credit committee before the expiration of his or her term of office, and shall at that meeting elect another member in place of the first mentioned member for the unexpired portion of his or her term.

(2) The notice calling the meeting of members referred to in subsection (1) shall specify that the purpose of the meeting is to remove the member of the credit committee who is named in the notice.

(3) A member of a credit committee removed under this section shall have the right to make such representations at the general meeting to the members of the credit union regarding the resolution for his or her removal as he or she may think fit, and may be represented at the general meeting by an attorney-at-law or an agent.

64. Removal of members of credit committee by Board.

Where a member of a credit committee fails to attend three consecutive meetings without, in the opinion of the Board, reasonable cause or fails to perform any of the duties allotted to the member as a member of the credit committee, the member's position on the credit committee may be declared vacant by the Board who may then appoint a qualified person to fill the vacancy until the next annual general meeting of the credit union.

65. Supervisory and compliance committee.

(1) A co-operative society shall have a supervisory and compliance committee who shall be elected by its members at the annual general meeting.

(2) A person shall not be elected to a supervisory and compliance committee if that person is not present at the meeting at which the election is held, unless he or she tenders an excuse for his or her absence which is accepted by the majority of the members present.

(3) The members of a supervisory and compliance committee shall hold office for a term of three years or until such time that their successors are elected whichever is later.

(4) The supervisory and compliance committee shall consist of the number of members specified in the bye-laws, which shall be not fewer than three.

(5) A person who is a member of the Board or the credit committee or who is an employee of the co-operative society shall not be a member of the supervisory and compliance committee.

(6) A majority of members of the supervisory and compliance committee shall constitute a quorum.

(7) The election of members of the supervisory and compliance committee shall proceed in keeping with subsections (a) to (d) of section 72 (1).

(8) Where a vacancy occurs in the supervisory and compliance committee, the supervisory and compliance committee may fill such vacancy until the next annual meeting of the co-operative society.

(9) The bye-laws of a co-operative society may provide for the election and retirement of members of the supervisory and compliance committee in rotation, except that a member of the supervisory and compliance committee shall not

(a) be elected for a term exceeding three years;

(b) serve for more than six successive years but shall become eligible for re-election after the expiration of one year.

66. Duties, functions and powers of supervisory and compliance committee.

(1) The supervisory and compliance committee shall

(a) keep minutes of its meetings;

(b) make or cause to be made not less than twice in the period before the next annual general meeting of the co-operative society, an examination of the books and documents of the co-operative society which shall include an inspection of the securities, cash accounts and all records relating to loans, purchases and sales;

(c) make or cause to be made, once in the period before the next annual general meeting, a comparison between the pass-book or statement of account of a random sample of at least 10% of all the members of the co-operative society and the appropriate records of the cooperative society;

(d) ascertain that all actions and decisions of the Board, committees, management and staff relating to the affairs of the co-operative society are in accordance with this Act, the Regulations, the bye-laws and the approved standards and policies of the co-operative society;

(e) submit a written report on the results of its examinations and enquiries under this section to the Board and the management of the cooperative society within seven days of each meeting of the supervisory and compliance committee; and

(f) submit a written report on the result of its examinations and enquiries under this section to the next annual general meeting or, if it thinks fit, to a special general meeting of the co-operative society.

(2) The supervisory and compliance committee shall have access, at all times, to the books and documents of the co-operative society.

(3) Members of the supervisory and compliance committee may attend meetings of the Board and all other committees of the co-operative society as observers.

67. Compliance officer.

(1) The Board shall appoint a senior qualified professional to monitor and periodically report to the supervisory and compliance committee and the Board on the levels of awareness, adherence and compliance in the internal operations of the society.

(2) A compliance officer appointed under subsection (1) shall track gaps and improvements in compliance with the Act, other applicable legislation, standards and best practices in keeping with legislation and guidelines in force or relating to anti-money laundering and combating terrorist financing.

68. Misappropriation and other contraventions of the Act.

(1) When the supervisory and compliance committee is of the opinion that the funds, securities or other property of the co-operative society have been misappropriated or misdirected, or that the bye-laws of the co-operative society, this Act or the Regulations have been contravened by the Board or a director, the credit committee or a member of the credit committee or by an officer or employee engaged by the Board, the supervisory and compliance committee shall immediately inform the Board and the Registrar in writing.

(2) The supervisory and compliance committee shall with the approval of the Board appoint an auditor or some other body to undertake a review to investigate or assist in determining whether any of the funds, securities or other property of the co-operative society have been misappropriated or misdirected and the remuneration of any auditor or other body to be appointed shall be determined by the supervisory and compliance committee and paid by the co-operative society.

(3) In the event of a misappropriation or misdirection or contravention, or a suspected misappropriation or misdirection or contravention, pending the outcome of the investigation or review referred to in subsection (2), the supervisory and compliance committee may suspend any member of the Board or member of the credit committee after having given the member an opportunity to be heard by the supervisory and compliance committee.

(4) On the completion of the investigation or review referred to in subsection

(2), if the supervisory and compliance committee considers that the Board, a director, the credit committee or an officer or employee engaged by the Board has taken any action or decision which is not in accordance with this Act, the Regulations or the bye-laws, then, after consultation with the Registrar, the supervisory and compliance committee may

(a) suspend the officer by a unanimous vote of all the members of the supervisory and compliance committee taken at a meeting of the supervisory and compliance committee called for the purpose of considering the officer's suspension; and

(b) convene a special general meeting of the co-operative society to consider whether to remove the officer in light of the action or decision taken by the officer.

(5) Where the Board or a Board member, the credit committee or a member of that committee or an officer or employee engaged by the Board has been suspended by the supervisory and compliance committee in accordance with subsection (4), the committee shall convene for a date not more than twenty-one days after the suspension, a special general meeting of the society

(a) for the purpose of reviewing the suspension; and

(b) to consider whether to remove the officer in the light of the action or decision taken by the officer.

(6) Without prejudice to the requirements of section 46, not less than ten days before the date of a meeting of the supervisory and compliance committee called as mentioned in subsection (4) or the date of a special general meeting of the co-operative society convened as mentioned in subsection (4) or (5), the supervisory and compliance committee shall give written notice of the meeting to the Registrar and to the officer concerned.

(7) At a special general meeting of a co-operative society held under this section, the members of the co-operative society, according to the purpose or purposes for which the meeting was convened, may, by secret ballot

(a) ratify the suspension of the officer concerned and remove the officer from office; or

(b) rescind the suspension of the officer, but an officer shall not be removed from office without being given an opportunity to be heard by the members present at the meeting.

(8) Where an officer of a co-operative society is removed from office at a special general meeting under subsection (7), the vacancy caused by the removal shall be filled in such manner as may be determined by the meeting.

69. Meetings of the supervisory and compliance committee.

The supervisory and compliance committee shall meet at least once every month and shall meet the Board at least four times in every year to review the Board's performance of its functions.

70. Removal of member of supervisory and compliance committee by the committee.

When a member of the supervisory and compliance committee fails to attend three consecutive meetings of the supervisory and compliance committee without, in the opinion of the other members of the committee, reasonable cause, or fails to perform any of the duties allotted to the supervisory and compliance committee as a member of the supervisory and compliance committee, the member's position on the supervisory and

compliance committee may be declared vacant by the remaining members of the supervisory and compliance committee who may appoint a qualified person to fill the vacancy until the next annual general meeting of the co-operative society.

71. Removal of member of supervisory and compliance committee by members.

(1) The members of a co-operative society may, by resolution passed by two-thirds of the votes cast at a general meeting duly called for that purpose, remove a member of a supervisory and compliance committee before the expiration of his or her term of office, and shall by vote cast at the meeting elect another member in his stead for the unexpired portion of his or her term.

(2) The notice calling the meeting of members referred to in subsection (1) shall state that the purpose of the meeting is to remove the member of the supervisory and compliance committee who is named in the notice.

(3) A member of the supervisory and compliance committee removed under this section shall have the right to make such representations to the members at a general meeting regarding the resolution for his or her removal as he or she may think fit, and may be represented at the general meeting by an attorney-at-law or an agent.

72. Election of directors.

(1) Subject to section 73 and to the Regulations

(a) the election of directors shall take place annually at the annual general meeting;

(b) the directors shall hold office until the conclusion of the meeting at which their successors are elected, and shall be eligible for re-election;

(c) where the number of nominees exceeds the number of directors to be elected, the election of directors may be by secret ballot;

(d) every member shall have the right to vote for the number of directors to be elected and any voting sheet that contains the names of more than the number to be elected shall be void;

(e) where there are vacancies on the Board but the remaining directors constitute a quorum, they shall call a special meeting of the Board for the purpose of appointing members to fill any such vacancy until the next annual general meeting; and

(f) where there is a vacancy on the Board and there is not a quorum of directors, the remaining directors shall call a special meeting of the co-operative society for the purpose of electing members to fill any vacancy.

(2) Where an election of directors required by this Act, the Regulations or the bye-laws does not take place at the proper time, the directors then in office shall continue in office until their successors are elected.

(3) Subject to sections 216(1) and 220, not more than one-third of the directors may be employees of a co-operative society.

(4) Unless a reasonable excuse is received in writing by the meeting, a person shall not be elected as a director if the person is not present at the meeting at which the election is being conducted.

(5) Subject to section 52(3), the Board shall consist of such numbers as may be fixed by the bye-laws.

73. Tenure of directors.

(1) Subject to subsection (3) the directors of a co-operative society shall be elected for a term of three years.

(2) A person shall not serve as a director of a co-operative society for more than six consecutive years but thereafter the person will become eligible for re-election after the expiration of one year out of office.

(3) After the commencement of this Act, on the formation of each new society, or on the re-constitution of a previously registered co-operative society, at the next annual general meeting of members the election of the Board, the supervisory and compliance committee and the credit committee shall be on a rotational basis as follows:

- (a) at least one-third shall be elected to serve for one year;
- (b) at least one-third shall be elected to serve for two years; and
- (c) the remainder shall be elected to serve for three years, and thereafter each elected member of the Board, the supervisory and compliance committee and the credit committee shall serve for a term of three years.

74. Additional powers of the Board.

(1) Subject to the bye-laws and the Regulations, the Board may without authorisation of the members of a co-operative society

- (a) borrow money on the credit of the co-operative society;
- (b) issue, re-issue, sell or pledge debt obligations of the co-operative society;
- (c) give a guarantee on behalf of the co-operative society to secure performance of an obligation of any person; and
- (d) mortgage, charge, hypothecate, pledge or otherwise create a security interest in all or any property of the co-operative society, owned or subsequently acquired, to secure any debt obligation of the cooperative society.

(2) A sale, lease, exchange of all or substantially all of the property of a cooperative society, other than in the ordinary course of business of the co-operative society, shall be approved by the members in a manner provided in subsection (3) to (7).

(3) The Board shall send in the manner provided in section 46, a notice of a special meeting to consider the sale, lease or exchange mentioned in subsection (2) to each member.

(4) The notice mentioned in subsection (3) shall be accompanied by a copy or summary of the agreement of sale, lease, or exchange mentioned in subsection (2).

(5) At a special meeting held under this section, the members may by special resolution

- (a) authorise the sale, lease or exchange mentioned in subsection (2); and
- (b) agree to or authorise the directors to agree to any terms and conditions of sale, lease or exchange.

(6) Each member of the co-operative society has the right to vote with respect to sale, lease or exchange mentioned in subsection (2).

(7) A sale, lease or exchange mentioned in subsection (2) is adopted when the members of the co-operative society have approved the sale, lease or exchange by a special resolution.

75. Validity of acts of directors and officers.

The act of a director or officer is valid notwithstanding an irregularity in his or her election or a defect in his or her appointment or qualification.

76. Indemnification of directors and officers.

(1) Subject to subsections (2) and (3), a co-operative society may indemnify

- (a) a director or officer of the co-operative society;
- (b) a former director or officer of the co-operative society; and
- (c) a person who acts or has acted at the request of the co-operative society as a director or officer of a body corporate of which the cooperative society is or was a member or a creditor, against costs, charges and expenses, including an amount paid to settle an action or satisfy a judgment, reasonably incurred by that person with respect to a civil, criminal or administrative action or proceeding to which that person is made a party by reason of the

person being or having been a director or officer of the co-operative society or the body corporate.

(2) A co-operative society may indemnify a director, officer, or other person referred to in subsection (1) only where that person

(a) acted honestly and in good faith with a view to the best interest of the co-operative society; and

(b) in the case of a criminal, civil or administrative action or proceeding that is enforced by a monetary penalty, had reasonable grounds for believing that the conduct was lawful.

(3) A co-operative society shall not indemnify a director, officer or other person referred to in subsection (1) with respect to an action by or on behalf of the cooperative society to obtain a judgment in its favour to which the person is made a party by reason of the person being or having been a director or an officer of the co-operative society, against costs, charges and expenses reasonably incurred by the person in connection with the action unless

(a) the co-operative society has the approval of the court; and

(b) the person fulfils the conditions described in subsection (2).

(4) Notwithstanding subsections (1) to (3), a co-operative society shall indemnify a director, officer or other person referred to in subsection (1) who has been substantially successful in the defence of a civil, criminal or administrative action or proceeding to which the person is made a party by reason of the person being or have been a director or officer of the co-operative society or body corporate against costs, charges and expenses reasonably incurred by the person with respect to the action or proceedings.

(5) A co-operative society or a director, officer or other person referred to in subsection (1) may apply to the court for an order approving the indemnity and the court may make the order.

(6) On an application under subsection (5), the court may order notice to be given to an interested person, and that interested person is entitled to appear and be heard in person or by an attorney-at-law.

77. Duty of care of directors and officers.

Every director and officer of a co-operative society in exercising his or her powers and discharging his or her duties shall

(a) act honestly and in good faith with a view to the best interests of the co-operative society; and

(b) exercise the care, diligence and skill that a reasonably prudent person would exercise in comparable circumstances, and shall be liable to make good any loss or damage suffered by the co-operative society as a direct or indirect result of a contravention of this section.

78. Ambit of duty.

The provisions of a contract, the bye-laws or the circumstances of his or her appointment do not relieve a director from

(a) the duty to act in accordance with this Act and the Regulations; or

(b) liability that by virtue of a rule of law would otherwise attach to him or her with respect to negligence, default, breach of duty or breach of trust of which he or she may be guilty in relation to the co-operative society.

79. Liability of directors.

(1) Where directors vote for, or consent to, a resolution authorising, or approve by any other means

(a) the purchase of shares of another co-operative society contrary to section 100;

- (b) the payment of a dividend on shares contrary to section 129;
 - (c) the payment of a bonus contrary to section 129;
 - (d) a loan or guarantee or the giving of financial assistance contrary to section 121;
 - (e) a payment of an indemnity described in section 76 to a director or a former director, without the approval of the court required by section 76(3); or
 - (f) an act not consistent with the purpose of the co-operative society as set out in its bye-laws and with respect to which the co-operative society has paid compensation to a person, they are jointly and severally liable to make good any loss or damage suffered by the cooperative society.
- (2) On the application of a director, the court may declare whether or not, having regard to any circumstances the court may consider appropriate (a) the co-operative society is insolvent; or
- (b) the payment of a bonus or dividend or the lending of money would make the co-operative society insolvent.
- (3) The liability imposed by subsection (1) is in addition to and not in derogation from a liability imposed on a director by any other enactment or law.
- (4) Subject to subsection (5), for the purpose of this section, a director who is present at a meeting of directors or of a committee shall be deemed to have cast a vote in favour of a resolution or of granting the approval mentioned in subsection (1), unless
- (a) the director's dissent is entered in the minutes of the meeting; or
 - (b) the director's written dissent is
 - (i) delivered to the secretary of the meeting before its adjournment; or
 - (ii) delivered or sent by registered mail to the registered office of the co-operative society immediately after the adjournment of the meeting.
- (5) A director who votes for or consents to a resolution mentioned in subsection (1) is not entitled to dissent under subsection (4).
- (6) Where a director is not present at a meeting of directors or of a committee at which a vote, resolution or approval mentioned in subsection (1) is cast or given, the director shall be taken to have cast an affirmative vote, consented to the resolution or given approval, unless, within fourteen days after becoming aware of the proceedings, the director delivers or sends by registered mail his or her written dissent to the registered office of the co-operative society.
- (7) On receipt of a written dissent, the secretary of the co-operative society shall
- (a) certify on the written dissent the date, time and place it is received; and
 - (b) keep the written dissent in the minutes of the meeting at which the resolution was passed.
- (8) An action to enforce a liability imposed in subsection (1) shall not be commenced after two years from the date of the meeting at which the vote, resolution or approval was taken or given.
- (9) In an action to enforce a liability imposed in subsection (1), the Court may, on the application of the co-operative society or a defendant
- (a) join as a defendant a person who received a benefit as a result of the resolution complained of; and
 - (b) make the person mentioned in paragraph (a) liable to the co-operative society jointly and severally with the directors to the extent of the amount paid to the person.
- (10) A director shall not be liable under subsection (1) where the director
- (a) proves that he or she did not know or could not reasonably have known that the act authorised by the resolution was contrary to this Act;
 - (b) relies and acts in good faith

(i) on statements of facts represented to him or her by an officer of the co-operative society to be correct; or

(ii) on statements contained in a written report or opinion of the auditor of the co-operative society or a professional person engaged by the co-operative society who is competent to give advice in respect to the matter.

(11) A director who is found liable under subsection (1) is entitled to apply to a court for an order compelling a member or other recipient to pay or deliver to the director any money or property that was paid or distributed to the member, or other recipient contrary to section 100, 121 or 129.

(12) In connection with an application under subsection (11) and where the court is satisfied that it is equitable to do so, it may

(a) order a member or other recipient to pay or deliver to a director any money or property that was paid or distributed to the member or other recipient contrary to section 100, 121 or 129; or

(b) make an order, other than that described in paragraph (a), that it considers appropriate.

80. Misuse of confidential information.

(1) A director, officer, committee member or employee or an associate of a director, officer, committee member or employee, who, in connection with a transaction relating to shares of a co-operative society or a debt obligation of a co-operative society, makes use of confidential information for the benefit or advantage of himself or herself or an associate that, if generally known, might reasonably be expected to affect materially the value of the share or the debt obligation

(a) is liable to compensate any person for a direct loss suffered by the person as a result of the transaction, unless the information was known or reasonably should have been known to the person at the time of the transaction; and

(b) is accountable to the co-operative society for any direct benefit or advantage received or receivable by him or her or his or her associate as a result of the transaction.

(2) Subject to subsection (3), a person who has acquired confidential information concerning a co-operative society or a member of a co-operative society

(a) as a director, committee member, officer, employee or auditor of the co-operative society;

(b) as a liquidator, receiver or manager, of the co-operative society; or

(c) as a Registrar, an officer or staff referred to in section 5, shall not disclose that information except as permitted under subsection (3), or use that information for any personal benefit not related to the duties through which the information was acquired.

(3) Subsection (2) does not apply to the giving of confidential information

(a) where the information is given in the course of that person's duty;

(b) where the information is a general credit rating of a person that is supplied by a director or employee of the co-operative society following a bona fide business request;

(c) where the information relates to a member of a co-operative society and is given with the written authorisation of that member or his or her legal representative;

(d) where the information relates to a co-operative society and is given with the written authorisation of the co-operative society or its legal representative; or

(e) where the information is required to be disclosed by law or by an order of the Court.

(4) A person who contravenes subsection (2) commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding ten thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both.

81. Declaration of interests.

(1) A director, committee member or employee of a co-operative society who

(a) is a party to a material contract or proposed material contract with the co-operative society; or

(b) is a director, committee member or employee of, or has a material interest in, a person who is party to a material contract or proposed material contract with the co-operative society, shall disclose in writing to the co-operative society the nature and extent of his or her interest.

(2) The disclosure required by subsection (1) shall be made (a) immediately after the director, committee member or employee becomes aware that the contract or proposed contract is to be considered or has been considered at a meeting of the Board;

(b) if the director, committee member or employee becomes interested after a contract is made, immediately after he or she becomes so interested; or

(c) where the director, committee member or employee has an interest in a contract before assuming office, immediately after he or she becomes a director, committee member or employee.

(3) For the purposes of this section, a general notice to the directors by a director, committee member or employee of a co-operative society declaring that he or she is to be regarded as interested in any contract made with that person is a sufficient declaration of interest in relation to any contract made with that person.

82. Disclosure of interests at meetings.

(1) If a director, committee member or employee of a co-operative society has any pecuniary interest, direct or indirect, in any contract, proposed contract or other matter and is present at a meeting of the co-operative society, Board or committee at which the contract, proposed contract or other matter is the subject of consideration, he or she shall at the meeting and as soon as practicable after its commencement disclose the fact and shall not take part in the consideration or discussion of the contract, proposed contract or other matter or vote on any question with respect to it and shall be excluded from the meeting for the duration of the consideration, discussion and voting procedure.

(2) A person who fails to comply with the provisions of subsection (1) commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding twenty thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding 2 years, or to both unless the person proves that he or she did not know that the contract, proposed contract or other matter in which he or she had a pecuniary interest was the subject of consideration at that meeting.

(3) A disclosure under subsection (1) shall be recorded in the minutes of the meeting of the co-operative society, Board or committee.

(4) An act or proceeding of the co-operative society, Board or committee shall not be questioned on the ground that a director, committee member or employee has contravened this section.

(5) Where a director, committee member or employee of a co-operative society is not entitled to vote at a meeting under subsection (1) and his or her presence is required to constitute a quorum at the meeting, a decision of the co-operative society, Board or committee is to be taken not to be invalid only by reason of the absence of the director, committee member or employee.

(6) Where a director, committee member or employee of a co-operative society fails to disclose his or her interest in a contract, proposed contract or other matter in accordance with this section, a court may, on the application of a co-operative society or a member of the co-operative society, set aside the contract or other matter on any terms that the court considers appropriate.

83. Pecuniary interests for the purposes of section 82.

(1) For the purposes of section 82, a director, committee member or employee shall be treated, subject to the following provisions of this section and to section 84, as having indirectly a pecuniary interest in a contract, proposed contract or other matter if

(a) he or she, or his or her nominee is a member of a company or other body with which the contract was made or is proposed to be made or which has a direct pecuniary interest in the licence or other matter under consideration; or

(b) he or she is a partner, or is in the employment of a person with whom the contract was made or is proposed to be made, or who has a direct pecuniary interest in the licence or other matter under consideration; or

(c) he or she, or his or her partner is a professional adviser to a person who has a direct or indirect pecuniary interest in a contract, proposed contract or other matter.

(2) Subsection (1) does not apply to membership of or employment under any public body.

(3) In the case of married persons the interest of one spouse shall be deemed for the purpose of section 82 to be also the interest of the other.

84. Removal or exclusion of disability.

(1) Section 82 does not apply to an interest in a contract, proposed contract or other matter which a director, committee member or employee of a co-operative society has as a member of the public or to an interest in any matter relating to the terms on which the right to participate in any service is offered to the public.

(2) Where a director committee member or employee of a co-operative society has an indirect pecuniary interest in a contract, proposed contract or other matter by reason only of a beneficial interest in securities of a company or other body, and the nominal value of those securities does not exceed five thousand dollars or one-thousandth of the total nominal value of the issued share capital of the company or other body, whichever is the less, and if the share capital is of more than one class, the total nominal value of shares of any one class in which he or she has a beneficial interest does not exceed one-thousandth of the total issued share capital of that class, section 82 shall not prohibit him or her from taking part in the consideration or discussion of the contract, proposed contract or other matter or from voting on any question with respect to it, without prejudice, however, to his or her duty to disclose his or her interest.

85. Meetings of directors generally.

(1) Subject to the bye-laws, the directors may meet at any place, and on any notice that they consider appropriate.

(2) The president

(a) may call a meeting of directors at any time; and

(b) on the written request of at least two directors, shall call a meeting within fourteen days of the receipt of the request.

(3) A majority of the directors shall constitute a quorum at any meeting of directors.

(4) Subject to the bye-laws, a notice of a meeting of directors may specify the purpose of or other business to be transacted at the meeting.

(5) For the purpose of subsection (4), attendance of a director at a meeting of directors is deemed to be a waiver of notice of the meeting, unless the director attends the meeting for the express purpose of objecting to the transaction of any business on the ground that the meeting is not lawfully called.

(6) Where the time and place of an adjourned meeting is announced at the original meeting, notice of an adjourned meeting of directors is not required to be given to the directors present at that meeting, but shall be given to any directors not so present.

86. Meetings by telephone, etc.

- (1) Subject to the bye-laws, where all the directors consent, a meeting of directors or of a committee may be held by means of
- (a) a telephone system; and
 - (b) a communication facility other than a telephone, that permits all persons participating in the meeting to hear and speak to each other, and a person so participating is deemed to be present at that meeting.
- (2) Unless this Act, the Regulations or the bye-laws require a meeting, a resolution of the directors may be passed without a meeting where
- (a) all the directors consent to the resolution in writing; and
 - (b) the consent is filed with the minutes of the proceedings of the directors.

87. Attendance at meetings.

- (1) A director of a co-operative society is entitled to receive notice of and to attend and be heard at every general meeting of members.
- (2) Where a director
- (a) resigns;
 - (b) receives a notice or otherwise learns of a meeting of members called for the purpose of removing him or her from office; or
 - (c) receives a notice or otherwise learns of a meeting of directors or members at which another person is to be appointed or elected to fill his or her office, whether because of the director's resignation or removal or because his or her term of office has expired or is about to expire, the director is entitled to submit to the co-operative society a written statement giving the reason for his or her resignation or the reasons he or she opposes any proposed action or resolution.
- (3) A co-operative society shall immediately send a copy of the statement mentioned in subsection (2) to the Registrar and shall make available a copy of the statement to every member.
- (4) A co-operative society or person acting on its behalf shall not incur any liability by reason only of circulating a director's statement sent in compliance with subsection (3).

88. Organisational meeting of directors.

- (1) The directors shall hold a meeting within ten days after the issue of the co-operative society's certificate of registration.
- (2) The directors may, at the meeting mentioned in subsection (1)
- (a) pass resolutions establishing policies of the co-operative society;
 - (b) adopt forms of corporate records;
 - (c) appoint officers;
 - (d) authorise the issue of securities;
 - (e) appoint an auditor to hold office until the first general meeting of the members;
 - (f) make banking or other financial arrangements;
 - (g) appoint authorised signing officers;
 - (h) adopt operating policies; and
 - (i) transact any other business.
- (3) A director may call the meeting of directors mentioned in subsection (1) by giving not less than five days' notice of the meeting to each director, stating the time and place of the meeting.
- (4) The notice mentioned in subsection (3) may be waived where all directors are in attendance at that meeting of directors.

89. Director ceasing to hold office.

- (1) A director ceases to hold office when he or she
 - (a) resigns;
 - (b) dies;
 - (c) fails to attend three consecutive meetings without a reasonable excuse;
 - (d) fails to perform any duties allotted to him or her as a member of the Board without reasonable excuse;
 - (e) is removed in accordance with section 90; or
 - (f) is no longer qualified in accordance with this Act.
- (2) A resignation of a director becomes effective
 - (a) with immediate effect where that person indicates to the members present at an annual general meeting that he or she is resigning;
 - (b) at the time the written resignation is received by the cooperative society or at the time specified in the written resignation, whichever is the later date; or
 - (c) where no time is specified in a written resignation, at the time the resignation is received by the co-operative society.

90. Removal of directors.

- (1) Subject to the Regulations and the bye-laws, the members of a co-operative society may, by special resolution, remove any director from office.
- (2) A vacancy created by the removal of a director may be filled at the meeting of the members at which the director is removed or where not so filled, may be filled under section 72(1)(e).

91. Notice of change of directors.

- (1) Within thirty days after a change is made in its directors, a co-operative society shall send to the Registrar a notice in the prescribed form setting out the change and the Registrar shall file the notice.
- (2) Notwithstanding subsection (1), where a co-operative society sends the annual return in accordance with section 147, within thirty days after a change is made in its directors, it is not required to send the notice required by this section.

92. Declaration by directors and officers.

- A co-operative society may by resolution passed by a majority of the members at an annual or special meeting require all directors and officers to sign annually or at any other time that may be specified in the resolution a declaration relating to
- (a) faithful performance of duties;
 - (b) secrecy of transactions with members; and
 - (c) faithful and loyal support of the co-operative society.

93. Bonding.

The directors shall require that every person appointed to an office that receives, manages or handles goods, merchandise or money on behalf of the co-operative society shall give to the directors, before entering on his or her duties as an officer, security or a bond in such amount as they may require.

94. Remuneration of directors.

- (1) A co-operative society shall not pay any remuneration directly or indirectly to a director or committee member in connection with his or her duties or for any service performed by that person in that capacity.

(2) Nothing in subsection (1) shall be regarded as prohibiting the reimbursement of expenses

(a) which are necessarily incurred by a director or committee member in the course of performing any service on behalf, or for the benefit, of the co-operative society; and

(b) which are approved by a majority of the directors voting at a meeting of the Board.

(3) Nothing in subsection (1) shall be regarded as prohibiting any director or committee member of a co-operative society, acting not as a director or committee member but in his or her professional capacity, from tendering for the supply of, and if successful being paid for supplying, goods or services to the co-operative society.

(4) The directors may be granted such honorarium as

(a) may from time to time be approved prior to its payment, or the payment of any part thereof, by the members in a general meeting; and

(b) does not exceed an amount recommended by the Board and approved by a general meeting of the members.

(5) A co-operative society may purchase and maintain insurance for the benefit of a director, member of a committee, officer or employee against a liability, loss and damage incurred by that person while serving the co-operative society as a director, officer, committee member or employee.

95. Remuneration of officers and employees.

Subject to section 94 and the bye-laws, the directors shall fix the salary of any employees appointed by the directors and shall approve a scale of remuneration for all employees of a co-operative society.

PART V FINANCING

96. Shares.

(1) A co-operative society may sell equity shares to its members only, but these shares shall be non-withdrawable but redeemable in accordance with the Regulations and the shares shall have a par value fixed by the bye-laws.

(2) Unless a co-operative society is required by this Act or any other enactment to limit its number of shares it shall have an unlimited number of shares.

(3) A share in a co-operative society is personal property and a shareholder is entitled to an annual statement showing the number of shares that he or she owns.

97. Share capital.

(1) A co-operative society shall express its share capital in its bye-laws as

(a) an amount of money divided into a specified number of shares set out in the bye-laws; or

(b) an amount comprising an unlimited number of shares with a specified par value.

(2) A co-operative society shall issue qualifying shares as well as equity shares, provided that the value of the qualifying shares and equity shares owned by the members shall not fall below the equivalent of ten per cent of the asset worth of the cooperative society as a result of any redemption of shares.

(3) The Registrar shall grant such period of time, not exceeding three years from the commencement of this Act, as the Registrar considers reasonable to enable an existing society to make good any deficiency in the adequacy of its capital base.

98. Issue of shares.

- (1) Subject to subsection (2), a co-operative society may issue shares at any time and for any consideration that the directors consider appropriate.
- (2) Subject to the bye-laws, a co-operative society shall sell its shares at their par value.
- (3) A member shall not be liable to the co-operative society or its creditors beyond the sum remaining unpaid on the member's subscription for shares.
- (4) A co-operative society shall not issue a share until it is fully paid
 - (a) in money; or
 - (b) in property that, in the opinion of the directors, is the fair equivalent of the money that the co-operative society would have received if the share had been issued for money.
- (5) For the purposes of subsection (4)(b), when determining whether property is the fair equivalent of a money consideration, the directors may take into account reasonable charges and expenses of organisation and reorganisation and payment for property reasonably expected to benefit the co-operative society.
- (6) For the purposes of this section "property" does not include a promissory note or a promise to pay.

99. Alteration of authorised capital.

- (1) Subject to the approval of the Registrar a co-operative society may, by special resolution, increase or decrease its share capital and, for that purpose, may
 - (a) subdivide any shares;
 - (b) consolidate shares into shares of a larger par value, but the par value of consolidated shares shall not be greater than one hundred dollars;
 - (c) cancel any shares that, at the date of registration of the bye-laws, have not been subscribed for or agreed to be issued and diminish the amount of its share capital by the amount of the par value of the shares so cancelled;
 - (d) extinguish or reduce the liability on any of its shares with respect to share capital not paid up;
 - (e) with or without extinguishing or reducing liability on any of its shares, cancel any paid up share capital that is lost or unrepresented by available assets; and
 - (f) with or without extinguishing or reducing liability on any of its shares and either with or without reducing the number of such shares, pay off and paid-up share capital that is greater than the requirements of the co-operative society.
- (2) The Registrar may give his or her approval under subsection (1) where the Registrar is satisfied that
 - (a) the resolution will not contravene this Act;
 - (b) the holders of all shares of the co-operative society affected by the proposed resolution have approved the special resolution passed by the members at a general meeting called for the purpose; and
 - (c) in the case of a special resolution providing for a reduction in the share capital of the co-operative society
 - (i) all creditors who are liable to be affected have been notified of the resolution and have signified their approval; or
 - (ii) appropriate steps have been taken by the co-operative society adequately to safeguard the interests of its creditors.

100. Limitation on purchase of shares.

- Subject to the approval of the Registrar, only a registered co-operative society may purchase more than one-fifth of the shares of another co-operative society where
- (a) that other co-operative society is insolvent;

- (b) the proposed purchase or acquisition would not render the purchasing co-operative society insolvent; or
- (c) subject to paragraph (b), the proposed purchase or acquisition would not, in the opinion of the Board, be detrimental to the financial stability of the purchasing co-operative society.

101. Transfer of shares generally.

- (1) A share may be transferred with the approval of the Board to any person, but if the transferee is not a member, he or she shall be approved as a member by the Board, or by a general meeting according to the bye-laws relating to the admission of members before the transfer can be registered.
- (2) If the bye-laws require a member to hold more than one share, a transferee shall acquire by the transfer, or by the transfer and allotment, the number so required to be held before the transfer can be registered.
- (3) A transfer of shares shall be effected in such form as the Registrar may determine.
- (4) A transfer of a share shall not be valid and effective unless and until such transfer has been registered by the Secretary on the direction of the Board.
- (5) A transfer of a share, if made by a member indebted to the co-operative society, shall not be registered without the written permission of the Board; and until the transfer is registered
 - (a) a right shall not be acquired against the co-operative society by the transferee; and
 - (b) a claim of the co-operative society upon the transferor shall not be affected by the transfer.

102. Transfer of shares of member of unsound mind.

- (1) Where a member or person claiming through a co-operative society has become of unsound mind or incapable of managing his or her affairs and no committee, receiver or guardian has been appointed, the co-operative society may subject to this section and section 101 transfer the share or interest of such member to any person nominated by such member for the purposes of section 106 or may pay to the person nominated a sum representing the value of the share or interest of such member ascertained in accordance with subsection (5).
- (2) Subject to subsection (3), if no nominee has been appointed, the cooperative society may pay a sum representing the value of the member's share or interest to the Registrar of the High Court.
- (3) If the value of the share or interest does not exceed one hundred dollars the Board may, subject to any conditions it thinks fit, pay the whole or any portion of such sum to the person who appears to have the care of the member or the management of the member's affairs.
- (4) All transfers and payments made by a co-operative society in accordance with this section shall be valid and effective against any demand made upon the co-operative society by any person.
- (5) For the purposes of this section and section 100, the value of any share or interest shall be represented by the sum actually paid for that share or interest by the member holding it unless the bye-laws of the co-operative society otherwise provide.
- (6) Where the benefits group insurance have accrued on such share or interest, the value of such benefits shall be the amount actually received by the co-operative society on the account of such deceased member.

103. Transfer of share or interest on death of member.

- (1) On the death of a member of a co-operative society, where a person has

been nominated by the member in accordance with section 106 and the nominee is admitted to membership of the co-operative society, the co-operative society shall within one year of the death of the member by whom the nomination was made, transfer the shares or interest of such deceased member to the nominee.

(2) On the death of a member of a co-operative society, where a person has been nominated by the member in accordance with section 106 has not been admitted to membership of the co-operative society or where the deceased member made no such nomination, the co-operative society shall within one year of the death of the member pay either to the nominee or to the legal personal representative of the deceased member, such sum as represents the value or part thereof of the deceased member's share or interest in the co-operative society.

(3) Nothing in this section shall be construed as prohibiting a nominee who has been admitted to membership from electing to receive payment representing the value of the deceased member's shares or interest instead of accepting a transfer.

(4) Where after a period of one year there is no nominee or legal personal representative of the deceased member to which the shares or interest may be transferred or to which a sum representing the value or part thereof of the deceased member's share or interest may be paid, the share or interest shall be transferred to the development fund of the co-operative society.

(5) The shares or interest transferred under subsection (4) shall remain in the development fund for a period not less than seven years during which period it shall remain available to bona fide claimants, after which it shall constitute a part of the reserves of the co-operative society.

104. Restrictions on transfer of shares.

Shares or interest or any part thereof in the capital of a co-operative society shall not be transferred unless the transfer is made to a member thereof or to a person whose application for membership has been accepted.

105. Conditions for the validity of transfer of shares.

(1) Subject to the bye-laws, a transfer of shares in a co-operative society is not valid for any purpose unless

(a) a written application for membership by the transferee is approved and the transfer is authorised by

(i) a resolution of the directors; or

(ii) a person authorised by a resolution of the directors to approve applications and transfers of that kind; and

(b) notification of any approval given under paragraph (a) is sent to the transferee and his or her name has been entered on the register of members.

(2) Notwithstanding subsection (1), a transfer of a share is valid for the purpose of providing evidence of the rights of the parties to the transfer between the transferor and the transferee.

106. Power of nomination.

(1) A member of a co-operative society may nominate a person or persons to or among whom there shall be transferred at his or her death such property in the cooperative society of which he or she is the owner at the time of his or her death, or as may subsequently have accrued thereon, whether in shares, loans or deposits, or so much thereof as is specified in such nomination if the nomination does not comprise the whole.

(2) A nomination under subsection (1) shall be made by instrument in writing signed by the member in the presence of two attesting witnesses and either delivered at or sent to

the registered office of the co-operative society during the lifetime of such member or made in any book kept at the co-operative society's registered office.

(3) A member of the co-operative society may nominate more than one person only if he or she holds more than one share.

(4) A nomination made under subsection (1) may be revoked or varied by a subsequent nomination, or by a similar document in the nature of a revocation or variation, signed, attested and delivered, and sent or made in accordance with subsection (1), but any such nomination may not be revoked or varied by the will of the nominator or by a codicil thereto.

(5) All nominations and all revocations or variations received by a co-operative society shall be maintained in a separate record kept at the registered office of the cooperative society.

PART VI

BUSINESS OF CO-OPERATIVE SOCIETY

107. Marketing of produce through the co-operative society.

(1) A co-operative society which has as one of its objects the marketing of any article of produce obtained by the work or industry of its members may by its bye-laws or otherwise contract with its members

(a) that every such member who produces any such article shall market the whole or any specified amount, portion or description thereof to or through the co-operative society; and

(b) that any member who is proved or adjudged to have contravened the bye-laws or to have acted in breach of the contract shall pay to the co-operative society liquidated damages in a sum ascertained or assessed in such a manner as may be prescribed in the bye-laws.

(2) A contract entered into under this section shall not be questioned in any court on the ground only that it is a contract in restraint of trade.

108. Creation of charge in favour of a co-operative society.

(1) A person to whom money has been lent by a co-operative society or who is otherwise indebted to the co-operative society may be required to create a charge in favour of the co-operative society in such form as may be prescribed in the Regulations.

(2) A charge shall so long as it continues in force confer on the co-operative society

(a) the right upon the happening of any event specified in the charge as being an event authorising the chargee to seize the property subject to the charge, to take possession of any such property so subject;

(b) after an interval of five clear days, or such less time as may be specified in the charge, from the date of taking possession of any property subject to the charge, to sell such property either by auction or, if the charge so provides, by private treaty, either for a lump sum or for payment by instalments; and

(c) to apply the proceeds of sale in or towards discharge of the debt secured by the charge and the costs of seizure and sale, and to pay any surplus of such proceeds to the member whose property was sold.

(3) A charge shall, so long as it continues in force, impose on the chargor an obligation to pay to the co-operative society towards the discharge of his or her indebtedness the proceeds of sale of any property comprised in the charge or any money received under any policy of insurance or by way of compensation in respect of any such property, except in so far as the charge otherwise allows.

(4) A charge under this section is not a bill of sale within the meaning of the Bills of Sale Act, Cap. 18.06.

109. Execution and registration of charge.

(1) A charge created under section 108 shall be duly executed if signed by the person in quintuplicate in the presence of

(a) the president of the co-operative society; and

(b) the secretary of the co-operative society.

(2) The secretary shall

(a) file one copy of the charge at the registered office of the co-operative society and deliver one copy each to the Registrar of the High Court, the Registrar of Co-operatives and the apex body; and

(b) deliver one copy to the member.

(3) The Registrar of the High Court shall keep a book known as the "Cooperative Societies Charges Book" in which the Registrar shall register every charge delivered to the Registrar by the secretary of a co-operative society, and issue to the co-operative society a certified copy of the registration.

(4) The registration of a charge under subsection (3) shall be deemed to affect with notice any person dealing with the property comprised in the charge.

(5) Where a loan or other indebtedness in respect of which a charge was created is discharged, the secretary of the co-operative society shall

(a) cause a document to that effect to be prepared in quintuplicate, and signed by the president and secretary of the co-operative society indicating that the charge has been discharged;

(b) file one copy of such document, deliver one copy each to the Registrar, the St. Kitts & Nevis National Co-operative League Ltd. and the Registrar of the High Court who shall forthwith make an entry of satisfaction in the Co-operative Societies Charges Book; and

(c) deliver one copy to the member.

(6) A person may, on payment of the fee prescribed in regulations made under this Act, inspect the Co-operative Societies Charge Book and take extracts from it.

(7) A charge subsisting at the commencement of this Act in favour of a cooperative society shall be deemed to be registered in the Co-operative Societies Charges Book, and any such charge shall, without prejudice to anything contained therein, have the same force and effect as a charge created under this Act.

110. Claims unaffected by charge.

Nothing in section 108 shall affect

(a) any claim of the Government in respect of taxes or money recoverable as such or of a landlord in respect of rent or money recoverable as rent; or

(b) the rights of any prior charges or encumbrance.

111. Prior claims in favour of co-operative society.

(1) Subject to any claim in respect of debt due to the Crown or to a landlord in respect of rent or any money recoverable as rent, any debt or outstanding demand owing to a co-operative society by a member or past member shall, notwithstanding anything contained in section 109, be a first charge

(a) upon the crops or other agricultural produce whether standing or severed, raised in whole or in part with the loan from the co-operative society by such member or past member; and

(b) upon any livestock, fodder for livestock, agricultural or industrial machinery or implements, or raw materials for use in manufacture or handicraft, or building used for the purpose of agriculture or industry, fishing or fish processing equipment to or purchased by such member or past member in goods or money granted to the member by the cooperative society.

(2) A person dealing with any of the property specified in subsection (1) shall be deemed to have notice of such first charge and all such dealing shall be subject to the charge and priority created by this Act.

112. Enforcement of charge.

(1) A co-operative society may enforce a charge by applying to the Magistrates' Court for a warrant of distress by certifying under seal to the court the amount due and particulars of the property so charged and the court shall issue a warrant of distress and may offer the sale of the property by public auction or private treaty.

(2) A magistrate shall have jurisdiction under subsection (1) even though the amount due exceeds the limits of jurisdiction of a magistrate specified in the Magistrates Code of Procedure Act, Cap. 3.17.

113. Assignment of charge.

(1) A co-operative society may borrow from any other co-operative society or from any bank approved by the Registrar on the security of a charge executed and registered in accordance with section 109 and may for this purpose assign the charge to the other cooperative society or bank.

(2) An assignment of a charge under this section shall be registered in the same manner as a charge and section 109 shall apply, subject to any necessary modifications, to an assignment so registered.

(3) An assignment of a charge when registered shall operate as a first charge in favour of the assignee subject to section 110.

(4) Where a charge is assigned to a co-operative society established with the object of facilitating the operation of other co-operative societies, the co-operative society may borrow from any bank approved by the Registrar and for this purpose may re-assign any such charge to the bank and subsections (2) and (3) shall apply, subject to any necessary modifications, to such reassignment.

114. Bond as security for charge.

(1) A co-operative society may require a member or officer to give a bond with or without sureties as additional security for the repayment of a loan.

(2) Conditions imposed on the member or officer relating to the payment of capital and interest under a charge or loan agreement shall be strictly observed and performed by the member or officer and on breach of any such condition the bond shall be forfeited forthwith.

(3) Section 113 relating to the assignment of charges shall apply subject to any necessary modifications to the assignment of bonds.

115. Lien on shares.

(1) A co-operative society shall have a lien on a share or any amount outstanding to the credit of a member or his or her legal representative for a debt due by that member to the co-operative society.

(2) A co-operative society may enforce a lien mentioned in subsection (1) in the manner set out in its bye-laws.

(3) The Board may, in default of payment by any member indebted to a cooperative society, apply the sum paid up for the time being on any shares held by that member in or towards the discharge of the debt so due and of any expenses relating to the debt or its discharge, and the defaulting member shall cease to have any further claim in respect of such shares.

116. Deductions applied to loans and shares.

The bye-laws of a co-operative society may provide that the co-operative society

(a) may deduct an amount from the moneys it receives for the goods, products or services it has marketed, handled, or dealt in for or on behalf of a member or non-member patron; and

(b) may apply the amount prescribed in paragraph (a) towards a loan or the purchase of shares on such terms as the Board may determine.

117. Purchase of shares.

(1) Subject to section 115, a co-operative society may purchase or otherwise acquire any of its shares that

(a) are available for compulsory purchase under section 119; or

(b) are offered for sale.

(2) A co-operative society shall pay in cash, within one year of the date of purchase, for any shares purchased under subsection (1).

(3) A co-operative society shall pay a purchase price for a share purchased under this section equal to the par value of the share together with any dividends declared but unpaid with respect to the share.

(4) Subject to subsection (5), where a co-operative society purchases or otherwise acquires shares issued by it, those shares shall be deemed to be cancelled.

(5) Where the bye-laws of a co-operative society limit the number of shares, any shares of the co-operative society purchased or otherwise acquired by the co-operative society may be treated as unissued shares.

118. Prohibition on purchase of shares.

(1) Notwithstanding section 117, a co-operative society shall not purchase or otherwise acquire its shares where

(a) it is insolvent;

(b) the proposed purchase or acquisition would render it insolvent; or

(c) subject to subsection (2), the proposed purchase or acquisition would, in the opinion of the Board, be detrimental to the financial stability of the co-operative society.

(2) Where a purchase or other acquisition of shares under section 117 or 119, would in the opinion of the Board, impair the financial stability of the co-operative society or would be contrary to the interest of the remaining members the Board may suspend the purchasing or acquisition of shares.

(3) The Board may not suspend the purchase of shares under subsection (2) for a period longer than one year unless the suspension is approved

(a) by the Registrar; or

(b) by a special resolution of the members.

119. Compulsory sale of shares.

Where

(a) winding-up proceedings have commenced with respect to a body corporate that is a member of a co-operative society; or

(b) a member of a co-operative society has, during a period of two years, failed to transact any business with the co-operative society, the co-operative society may, by written notice to the member, require the member to sell his or her shares to the co-operative society.

PART VII**PROPERTY AND FUNDS OF CO-OPERATIVE SOCIETY**

120. Investment of funds.

(1) The Board shall establish written policies for investing for income the accumulated funds of the co-operative society not used in the primary business of the cooperative society, and shall ensure they are in compliance with legislative requirements.

(2) Subject to subsections (3) and (4), the funds of a co-operative society including the reserve may be invested or deposited in

(a) any central credit union, central finance facility, deposit guarantee or stabilisation fund for credit unions or co-operative societies, or other co-operative society registered under this Act;

(b) shares or deposits in, loans to, or on the security of, any co-operative society with limited liability;

(c) any financial institution licensed under the Banking Act, 2004 or any company registered under the Insurance Act, No. 8 of 2009;

(d) any stock, debentures, funds or securities issued by the government;

(e) securities, the payment of interest on which is guaranteed by the government;

(f) securities issued in a CARICOM Member State by a company incorporated in that member state and listed by the stock exchange of a CARICOM Member State if the company has paid dividends on its shares for the preceding five consecutive years;

(g) securities issued in a CARICOM Member State by a credit union that is registered in a CARICOM Member State in accordance with the laws of that CARICOM Member State;

(h) real property but subject to the provision of section 199(5) where the co-operative society is a credit union; and

(i) any other manner permitted by the Registrar.

(3) The investments referred to in subsection (2) (d), (e), (f), (g) and (i) shall not exceed in aggregate ten per cent of the unimpaired capital of a credit union.

(4) The equity investment of a co-operative society in any entity shall be limited to twenty percent of the equity investment of that entity.

(5) A society shall not invest the funds referred to in subsection (2) in a single institution or instrument.

121. Loan by credit union.

(1) The Board of a credit union or a central credit union or central co-operative society shall establish written policies for the consideration, approval and administration of loans, guarantees, advances and other forms of financial assistance as a primary service to its members.

(2) Except for a loan to another co-operative society, a loan shall not be made to a member by a co-operative society in a manner contrary to the provisions of subsection (1) and a loan shall not be made by a co-operative society mentioned in subsection (1) to a person who is not a member of that co-operative society.

(3) A loan shall not be made by a credit union to a director, committee member, or employee of the credit union of a sum in excess of the aggregate value of his or her shares, deposits and accumulated dividend and interest thereon unless adequate security is provided for the amount of the loan in excess of that value.

(4) A loan shall not be made to a director, committee member or employee referred to in subsection (3) on any terms relating to interest rates, discounts or waivers or on any other terms more favourable than those offered to the general membership.

(5) A loan shall not be made to a director, committee member or employee referred to in subsection (3), if when combined with all other outstanding loans to persons referred to in subsection (3), the persons' business interest or the persons' immediate family it exceeds twenty per cent of the credit union's share capital.

(6) Unless with the prior approval of the Registrar, a loan shall not be made by a credit union to a member or a group of related members if the loan would cause the aggregate amount of loans to the member of the group of related members to exceed ten per cent of the share capital.

(7) In accordance with section 82, a director, committee member or employee of a credit union shall declare his or her interest in a loan at a meeting in which the loan is to be discussed and shall not be present or be present at or participate in a meeting when his or her application for a loan is being considered.

(8) Any loan made in contravention of this section shall be void and shall be repaid to the co-operative society immediately.

(9) Subject to the other provisions of this section, the bye-laws of a credit union shall provide for limits on the amounts of loans to any one member or on any type of loans.

122. Prohibited loans.

Subject to this Act, a co-operative society shall not, directly or indirectly, give a loan, guarantee or other means of financial assistance

(a) to a member, director, officer, committee member or employee of the co-operative society or an associate of any such person for any purpose; or

(b) to any person for the purpose of or in connection with, the acquisition of membership of the co-operative society or the purchase of a share issued or to be issued by the co-operative society or member, where there are reasonable grounds to believe that the co-operative society is insolvent or would, after giving the financial assistance, be insolvent.

123. Receipt of loans and deposits.

(1) Subject to the provisions of any bye-laws of a co-operative society made for the purpose, a co-operative society may receive loans, grants and donated capital from persons or institutions that are not members of the co-operative society for the purpose of meeting any of its obligations or discharging any of its functions under this Act.

(2) A co-operative society may by mortgage or in any other manner it deems appropriate, guarantee the repayment of any sums received by it under subsection (1).

(3) Deposits shall be accepted in the manner and form and subject to any conditions that may be prescribed in the Regulations.

124. Receipt of deposits from minors.

(1) A co-operative society may receive deposits from a minor and pay to such minor such deposit together with the interest accrued thereon.

(2) Any deposit made on behalf of a minor may, together with any interest accrued thereon, be paid to the parent of the minor or, where the minor is under the care of a guardian, to such guardian for the use of the minor.

(3) The receipt of a minor or his or her parent or guardian for money received under this section shall be a good and sufficient discharge of the liability of the co-operative society in respect of that money.

(4) Where a person under a legal disability, other than minority, is entitled to receive money from a co-operative society such money may be paid by the co-operative society to the Registrar of the High Court to the credit of such person under such disability, and the receipt of the Registrar of the High Court or of the person under disability shall be good and sufficient discharge of the liability of the co-operative society to pay that money.

(5) The Registrar of the High Court may retain out of any money so paid to him or her a sum not exceeding one per cent thereof for fees of office and shall pay or apply the remainder to or for the care, maintenance, education or benefit of the person under disability.

125. Allocation of surplus.

(1) Where a co-operative society realises a surplus in a financial year before it allocates among or credits to members the surplus, the directors

(a) shall use any part of the surplus that the co-operative society will require to refund all or any part of a deficit it has previously incurred;

(b) shall establish and maintain a reserve to be known as its statutory reserves; and

(c) may provide, out of any surplus remaining after paragraphs (a) and

(b) have been complied with, in the manner set out in its bye-laws for payment out of the surplus, dividends on members' equity shares.

(2) The statutory reserves required by subsection (1)(b) shall be part of the institutional capital of the co-operative society and may, subject to the approval of the Registrar, be used in the business of the co-operative society, including unforeseen losses, unexpected shortfalls in liquid cash, capital retention, improved earnings, financing of non-earning assets, repair and maintenance and the avoidance of external borrowing.

(3) A co-operative society shall ensure that its statutory reserves and other institutional capital reserves are, at no stage, less than ten per cent of its total assets.

(4) If at the end of any financial year the amount standing to statutory reserves and other institutional capital reserves before any transfer under this section is less than ten per cent of total assets, the co-operative society shall transfer to statutory reserves for that year not less than twenty five per cent of its surplus or such lesser sum as may be required to increase the statutory reserves to ten per cent of total assets.

(5) Where at the end of any financial year the amount standing to statutory reserves and other institutional capital reserves before any transfer under this section is more than ten per cent of total assets, the co-operative society may not make any transfer to statutory reserves.

(6) The Registrar shall grant such period of time as the Registrar considers reasonable to enable management to make good any deficiency in the adequacy of its capital base.

126. Development fund.

(1) A co-operative society shall establish and maintain a development fund, which may include any existing education fund or educational reserve.

(2) A co-operative society that realises a surplus from its operations as ascertained by the annual audit shall make such annual contribution to its development fund as determined by the apex body not exceeding ten per cent of that surplus, and such fund shall be used for strengthening the capacity and growth of co-operative societies and for human resource development.

(3) Subject to subsection (4), a co-operative society's development fund shall be administered in part or in whole by the apex body in accordance with its bye-laws.

(4) Where an apex body has not been established or is not functioning as such, the development fund shall be administered by such person or body of persons as the Registrar may determine, with the approval of the active co-operative societies.

127. Pension fund.

(1) A co-operative society may establish a contributory pension fund for its servants and employees and may contribute to such fund.

(2) A pension fund established under subsection (1) shall not be considered part of the assets of the co-operative society but may be invested in such manner as may be prescribed by the bye-laws.

128. Charitable contributions.

After making the prescribed payments to its statutory reserve and development fund a co-operative society may contribute to any non-profit, charitable, benevolent, community, co-operative or cultural improvement purpose.

129. Dividend or bonus.

(1) Subject to this section and sections 125 and 126, any surplus may be distributed by way of dividend or bonus amongst its members in proportion to their business with the co-operative society at such rate as may be prescribed.

(2) A co-operative society shall not

(a) declare or pay a dividend or bonus or distribute any part of its accumulated funds before the financial statements have been certified by a qualified auditor;

(b) pay a dividend or make any payment on account out of surplus until its institutional capital has reached a proportion of not less than five per cent of the total assets of the co-operative society; or

(c) declare or pay a dividend from unrealised gains including stock grants or share grants or gains arising from asset revaluation.

(3) A bonus based on wages or on the value of the products of a member or a bonus or patronage rebate calculated in proportion to the amount of the business done by each member with the co-operative society may be distributed periodically to the members from surplus funds after the deduction of all expenditure and after making allocation to the statutory reserves.

PART VIII

FINANCIAL DISCLOSURE AND AUDIT

130. Annual financial statement.

(1) The directors of a co-operative society shall place before the members at every annual meeting of members of the co-operative society

(a) comparative financial statements relating separately to

(i) the period that began on the date the co-operative society came into existence and ended not more than twelve months after that date, or, if the co-operative society has completed a financial year, the period that began immediately after the end of the last period for which financial statements were prepared and ended not more than twelve months after the beginning of that period; and

(ii) the immediately preceding financial year;

(b) the report of the auditor; and

(c) any further information respecting the financial position of the cooperative society and the results of its operations required by the bye-laws.

(2) The financial statements mentioned in subsection (1)(a)(ii) may be omitted if the reason for the omission is set out in the financial statement to be placed before the members or in a note attached thereto.

(3) The financial statements referred to in subsection (1)(a) shall include the balance sheet and detailed profit and loss accounts in respect of all business transacted by the co-operative society in the financial years covered by the statements, prepared in accordance with international accounting standards and including consolidated balance sheets and profit and loss accounts in any case where the co-operative society has subsidiaries or associated companies.

131. Approval of financial statements.

(1) The directors of a co-operative society shall approve the financial statements referred to in section 130, and the approval shall be acknowledged by the signature of two or more directors.

(2) A co-operative society shall not issue, publish or circulate copies of the financial statements referred to in section 130 unless the financial statements are

(a) approved and signed in accordance with subsection (1); and

(b) accompanied by an auditor's report and management letter from the co-operative society's auditor.

(3) A co-operative society shall send to the Registrar a copy of the financial statements, auditor's report and management letter referred to in section 130 within ten days prior to the annual general meeting of the co-operative society.

132. Providing financial statements.

(1) Not less than ten days before each annual meeting of members, a cooperative society shall make available to each member a copy the financial statements and report of the auditor referred to in section 130.

(2) Where a co-operative society applies to the Registrar and the Registrar is satisfied that there are reasonable grounds, the Registrar may excuse the co-operative society from complying with subsection (1).

133. Auditor's qualifications.

Subject to section 134, a co-operative society's auditor shall be a member of a recognised professional body satisfactory to the Registrar and qualified to conduct audits.

134. Disqualifying auditor.

(1) Subject to subsection (4), an individual shall not be qualified to be an auditor of a co-operative society if he or she is not independent of the co-operative society and its member co-operative societies, and of the directors and officers of the co-operative society and its member co-operative societies.

(2) For the purposes of this section whether or not an individual is independent is a question of fact to be determined having regard to all the circumstances.

(3) An individual shall be presumed not to be independent of a co-operative society if he or his business partner

(a) is a member, a director, an officer or an employee of the co-operative society or any of its member co-operative societies or a business partner or employee of any director, officer, member of employee of any such co-operative society, or its member co-operative societies;

(b) is a member of a credit committee or any other committee of the cooperative society or any of its member co-operative societies;

(c) transacts a substantial amount of business with the co-operative society or any of its member co-operative societies;

(d) if a chief executive officer, chief financial officer, chief accounting officer, or any person serving in an equivalent position for the cooperative society was employed by that individual and participated in any capacity in the audit of that co-operative society during the one year period preceding the date of the initiation of the audit; or

(e) provides to the co-operative society contemporaneously with the audit, any non-audit service including

(i) bookkeeping or other services relating to the accounting records or financial statements of the co-operative society;

(ii) financial information systems design and implementation;

(iii) appraisal or valuation services, fairness opinions, or contributions-in-kind reports;

- (iv) actuarial services;
 - (v) internal audit outsourcing services;
 - (vi) management functions or human resources;
 - (vii) broker, dealer or investment adviser services;
 - (viii) legal services and expert services unrelated to the audit; or
 - (ix) any other service that the Registrar determines is not permissible.
- (4) The provision of professional advice by or on behalf of an individual or his or her business partner shall not by itself deprive an individual or his or her business partner of his or her independence for the purposes of this section.
- (5) An auditor who becomes disqualified under this section or has been replaced or whose term has expired shall immediately notify the Registrar in writing and state the reasons for termination of his or her appointment.
- (6) A member of a co-operative society may apply to the Registrar for an order or the Registrar may, upon its own motion, make an order declaring an auditor disqualified under this section and the office of auditor vacant.

135. Appointment of auditor.

- (1) Subject to subsection (4), the members of a co-operative society shall
- (a) at the first general meeting, appoint an auditor to hold office until the close of the first annual general meeting; and
 - (b) at each annual meeting, appoint an auditor to hold office until the close of the next annual general meeting.
- (2) Notwithstanding subsection (1)(b), if an auditor is not appointed at an annual meeting, the incumbent auditor shall continue in office until his or her successor is appointed at a subsequent meeting.
- (3) The remuneration of an auditor shall be specified by the Board.
- (4) An individual shall not accept appointment, consent to be appointed or be appointed as auditor of a co-operative society if he or she is replacing an auditor who has resigned, been removed or whose term of office has expired or is about to expire, until the individual has requested or received from the former auditor a written statement of the circumstances and reasons why, in the auditor's opinion, the auditor is to be replaced.
- (5) Notwithstanding subsection (4), an individual otherwise qualified may accept appointment or consent to be appointed as auditor of a co-operative society if, within twenty-one days of making the request referred to in that subsection, the individual does not receive a reply to it.
- (6) An auditor shall not assume office unless he or she has confirmed in writing to the co-operative society his or her willingness to serve as auditor.

136. Cessation of office.

- (1) An auditor of a co-operative society ceases to hold office when he or she
- (a) resigns by giving written notice to the co-operative society;
 - (b) is removed under section 137; or
 - (c) has held the office for five consecutive years.
- (2) The resignation of an auditor shall become effective at the time his or her written resignation is sent to the co-operative society, or at the time specified in the resignation, whichever is the later date.
- (3) The cooperative society shall notify the Registrar in writing of the resignation of an auditor under subsection (1) within seven days of receipt of the resignation.

137. Removal of auditor.

The members of a co-operative society may, by ordinary resolution at a special meeting remove an auditor other than an auditor appointed by the Registrar under section 139.

138. Filling vacancy of auditor.

- (1) Subject to subsection (4), the directors shall immediately fill a vacancy in the office of auditor.
- (2) If there is not a quorum of directors, the directors then in office shall, within twenty-one days after a vacancy in the office of auditor occurs, call a special meeting of members to fill the vacancy.
- (3) Where the directors fail to call a meeting under subsection (2) or where there are no directors, a meeting for the purpose of filling a vacancy in the office of auditor may be called by any member.
- (4) The bye-laws of a co-operative society may provide that a vacancy in the office of auditor be filled only by vote of the members.
- (5) An auditor appointed to fill a vacancy shall hold office for the unexpired term of his or her predecessor.

139. Auditor appointed by Registrar.

If a co-operative society does not have an auditor, the Registrar may, upon the Registrar's own motion and shall, upon the application of a member, appoint and specify the remuneration of an auditor, and the auditor shall, subject to section 133, hold office until an auditor is appointed in accordance with section 135.

140. Auditor's right to notice.

The auditor of a co-operative society is entitled to receive notice of every annual general meeting of the members of the co-operative society, and to be heard in presenting his or her report at the meeting.

141. Required notice.

If a member of a co-operative society who is entitled to vote at a meeting of members, or a director of a co-operative society, gives written notice to the auditor or a former auditor of the co-operative society, not less than ten days before a meeting of members of the co-operative society, to attend the meeting, the auditor or former auditor shall attend the meeting at the expense of the co-operative society and answer questions relating to his or her duties as an auditor or former auditor.

142. Auditor's right to comment.

- (1) An auditor who
 - (a) resigns;
 - (b) receives a notice or otherwise learns of a meeting of members called for the purpose of removing the auditor from office; or
 - (c) receives a notice or otherwise learns of a meeting of members or directors at which another person is to be appointed to fill the office of auditor, whether because of the resignation or removal of the incumbent auditor or because the auditor's term of office has expired or is about to expire, may submit to the co-operative society and to the Registrar a written statement giving the reason for his or her resignation or the reasons why he or she opposes any proposed action.
- (2) When it receives a statement referred to in subsection (1), the co-operative society shall immediately send a copy of the statement to every member entitled to receive notice of any meeting of members and to the Registrar.

143. Examination by auditor.

- (1) The auditor of a society shall examine its books and records and shall make a report upon the annual financial statements and financial position to be placed before the members, and in every such report the auditor shall state whether in the auditor's opinion the balance sheet and income and expenditure account give a true and fair view of the state of affairs of the society and of its results for the period then ended and submit any additional information in relation to the audit of the society as the board or the Registrar considers necessary.
- (2) It shall also be the duty of the auditor to certify whether the appropriate measures to counter money laundering and other suspicious transactions are in place.

144. Auditor's right to inspect.

- (1) Upon the demand of an auditor of a co-operative society the present or former directors, officers, employees or agents of the co-operative society shall provide to the auditor
- (a) such information and explanations; and
 - (b) such access to records, documents, books, accounts and vouchers of the co-operative society, as are in the opinion of the auditor, necessary to enable the auditor to make the examination and report required under section 143 and that the former directors, officers, employees or agents are reasonably able to provide.
- (2) Upon the demand of the auditor of a co-operative society, the directors of the co-operative society shall
- (a) obtain from the present or former directors, officers, employees or agents of any member of the co-operative society, the information and explanations that the directors, officers, employees and agents are reasonably able to provide and that are, in the opinion of the auditor, necessary to enable the auditor to make the examination and report required under section 143; and
 - (b) provide the information and explanations so obtained to the auditor.
- (3) A former or present director, committee member, employee or agent of any member of a co-operative society, shall not take any action fraudulently to influence, coerce, manipulate or mislead an independent auditor in the performance of an audit of the financial statements of a co-operative society for the purpose of rendering such financial statements materially misleading.
- (4) A former director, officer, employee or agent of a member who contravenes subsection (2) or (3) commits an offence and is liable on summary conviction
- (a) in the case of a first offence to a fine not exceeding twenty five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding three months or to both;
 - (b) in the case of a subsequent offence to a fine not exceeding forty thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both.

145. Error or misstatement.

- (1) A director or an officer of a co-operative society shall forthwith notify the co-operative society's auditor of any error or misstatement of which the director or officer becomes aware in a financial statement upon which the auditor or former auditor has reported.
- (2) When the auditor or a former auditor of a co-operative society is notified or becomes aware of an error or misstatement in a financial statement upon which he or she has reported to the co-operative society and in his or her opinion, the error or misstatement is material, he or she shall inform each director of the co-operative society accordingly.
- (3) When under subsection (2) the auditor or a former auditor of a co-operative society informs the directors of an error or misstatement in a financial statement of the cooperative society, the directors shall (a) prepare and issue revised financial statements; or

(b) otherwise inform the members and the Registrar of the error or misstatement.

146. Privilege of auditor.

An auditor shall not be liable to any person in an action for defamation based on any act done or not done, or any statement made by him or her in good faith in connection with any matter he or she is authorised or required to do under this Act.

147. Annual, monthly and special returns.

(1) Not less than ten days, or such shorter period as the Registrar may allow, before the date of its annual meeting a co-operative society shall

(a) file with the Registrar an annual return for the previous year, on the form provided by the Registrar; and

(b) provide the Registrar with a copy of the financial statement to be placed before its members at its next annual meeting.

(2) Within thirty days of the end of each month, a co-operative society shall file a monthly return with the Registrar in accordance with the Regulations.

(3) The Registrar may, by notice in writing, require a co-operative society, director or officer of a co-operative society to make a special return on any subject connected with the business and affairs of the co-operative society including on risk focused information, prudential reports, quarterly reports of large credit exposures, non-performing loans, investments, assets and liabilities, variance reports.

(4) Where the Registrar requests a special return under subsection (3), the Registrar shall specify in the notice a time within which the special return is to be made.

PART IX

RECONSTRUCTION OF CO-OPERATIVE SOCIETIES

148 Methods of reconstruction.

(1) The reconstruction of a co-operative society is subject to the approval of the Registrar and may be effected by

(a) the amalgamation of one co-operative society with another cooperative society to form a single co-operative society;

(b) the transfer of the assets and liabilities of one co-operative society to another co-operative society; or

(c) the division of a co-operative society into two or more co-operative societies.

(2) Sections 151 to 154 shall have effect with respect to the procedure that shall be followed in relation to subsection (1).

149. Conversion.

(1) A company registered under the Companies Act, Cap. 21.03 or a registered industrial, provident or friendly co-operative society may, by special resolution, determine to convert itself into a co-operative society.

(2) A special resolution for conversion into a co-operative society under subsection (1) shall appoint ten members of the company or the industrial, provident or friendly co-operative society who together with the secretary, shall sign the proposed byelaws and who may, by resolution, be given such powers to act on behalf of the company or the industrial, provident or friendly co-operative society as may be specified in such resolution.

(3) A copy of the special resolution referred to in subsection (1) with three copies of the bye-laws shall be sent to the Registrar who may, upon receipt thereof, register the co-operative society and issue a certificate in accordance with section 16.

150. Effect of certificate of registration.

(1) On the date of the certificate of registration issued under section 149

(a) the incorporation or registration under any other enactment of the company or the industrial, provident or friendly co-operative society shall cease and shall be cancelled by the proper officer;

(b) the conversion of the company or the industrial, provident or friendly co-operative society shall be effective;

(c) the property of the company or the industrial, provident or friendly co-operative society shall become the property of the co-operative society;

(d) the co-operative society shall be liable for the obligations of the company or the industrial, provident or friendly co-operative society;

(e) an existing cause of action, claim or liability or prosecution against the company or the industrial, provident or friendly co-operative society shall not be affected;

(f) a civil, criminal or administrative action pending against a converted company or an industrial, provident or friendly co-operative society may be continued against the registered co-operative society; and

(g) a conviction against or a ruling, order or judgment in favour of or against a company or an industrial, provident or friendly co-operative society may be enforced by or against the registered co-operative society.

(2) An obligation or penalty arising under any of the matters mentioned in subsection (1) for which the former company, or industrial, provident or friendly co-operative society is liable or potentially liable at the date of the certificate of registration issued under section 149 shall have priority as against the property of the registered co-operative society over all other rights or claims against, or liabilities of the registered co-operative society.

151. Amalgamation of co-operative societies.

(1) Any two or more co-operative societies may, by a resolution passed by not less than three-fourths of all the members of each co-operative society present and voting at a special general meeting called for the purpose, amalgamate as one co-operative society.

(2) Where a resolution referred to in subsection (1) is passed, each such cooperative society shall apply to the Registrar for cancellation of its registration and the cooperative societies shall jointly make application for the registration of the amalgamated co-operative society.

(3) The registration of the amalgamated co-operative society shall be sufficient to vest the assets and liabilities of the amalgamating co-operative societies in the amalgamated co-operative society.

152. Transfer of assets of co-operative societies.

(1) Any co-operative society may, by resolution passed by not less than threefourths of all the members present and voting at a special general meeting called for the purpose, agree to transfer its assets and liabilities to any other co-operative society which has agreed to accept them.

(2) The acceptance of that other co-operative society shall be by a resolution passed by not less than three-fourths of the members of that other co-operative society present and voting at a special general meeting called for the purpose.

(3) On the passing of the resolutions referred to in subsections (1) and (2), the transferor co-operative society shall apply to the Registrar for cancellation of its registration and the transferee co-operative society shall submit to the Registrar a copy of the transferee co-operative society's resolution agreeing to the transfer.

(4) Subject to subsection (5), the cancellation of registration and the submission of the resolution agreeing to accept the transfer shall be sufficient to vest the assets and liabilities of the transferor to the transferee.

(5) Where the vesting of the assets of a co-operative society involves real estate, a copy of the resolution referred to in subsection (1), certified as such by the Registrar, shall be recorded at the Land Registry.

153. Claims of objecting creditors.

Notwithstanding sections 151 and 152 an amalgamation or transfer shall not be effected unless the creditors of the co-operative societies concerned are given three months' written notice of the proposal and have signified that they have no objections.

154. Division of co-operative society.

(1) A co-operative society may, by resolution in this section referred to as a "preliminary resolution" passed by three-fourths of the members present and voting at a special general meeting called for the purpose, resolve to divide itself into two or more cooperative societies.

(2) A preliminary resolution

(a) shall contain proposals for the division of the assets and liabilities of the co-operative society among the new co-operative societies into which it is proposed to divide the co-operative society; and

(b) may specify the area of operation of, and the members who will constitute, each of the new co-operative societies.

(3) A copy of the preliminary resolution shall be sent to the Registrar and all members and creditors of the co-operative society that is being divided.

(4) At least ten days notice of the preliminary resolution shall be given to any person whose interest will be affected by the division of the co-operative society, and by publishing the notice in the Gazette and in at least two issues of a newspaper published and circulated in Saint Christopher and Nevis.

(5) A member of a co-operative society may, notwithstanding any bye-law to the contrary, by notice given to the co-operative society within a period of three months from his or her receipt of the preliminary resolution, state his or her intention not to become a member of any of the new co-operative societies.

(6) A creditor of the co-operative society may, notwithstanding any agreement to the contrary, by notice given to the co-operative society within a period of three months from his or her receipt of the preliminary resolution, state his or her intention to demand the payment of moneys due him or her.

(7) Any person, other than a member or creditor, whose interest may be affected by the division of a co-operative society may, by notice given to the co-operative society, object to the division unless his or her claim is satisfied.

(8) After the expiry of three months from the receipt of the preliminary resolution by all the members and creditors of the co-operative society and of the notice to other person given under subsection (4), another special general meeting of the co-operative society, of which at least fifteen days notice shall be given to its members, shall be convened for the consideration of the preliminary resolution.

(9) If at the special general meeting referred to in subsection (8) the preliminary resolution is confirmed by a special resolution either without changes or with such changes as in the opinion of the Registrar are not material, the Registrar may, subject to subsection (11) and section 16, register the new co-operative societies; and upon registration, the original co-operative society shall be taken to be dissolved and its registration cancelled.

(10) The decision of the Registrar as to whether any changes made in the preliminary resolution are material shall be final and not subject to any appeal.

(11) At the special general meeting referred to in subsections (8) and (9) provision shall be made by another resolution for

(a) repayment of the share capital of all the members who have given notice under subsection (5);

(b) satisfaction of the claims of all the creditors who have given notice under subsection (6); and

(c) satisfaction of the claims of such of the other persons, who have given notice under subsection (7), but no member or creditor or other person shall be entitled to such repayment or satisfaction until the preliminary resolution is confirmed in accordance with subsection (9).

(12) Where within such time as the Registrar considers reasonable

(a) the share capital of the members referred to in subsection (11)(a) is not repaid;

(b) the claims of the creditors referred to in that subsection are not satisfied; or

(c) the claims of the other persons mentioned in subsection (11)(c) are not satisfied or secured, the Registrar may refuse to register the new co-operative societies.

155. Effect of registration of new co-operative societies.

The registration of new co-operative societies established under section 154 is sufficient to vest the assets and liabilities of the original co-operative society in the manner specified in the preliminary resolution as confirmed in accordance with section 154(8) and (9).

PART X

RECEIVERS AND RECEIVER-MANAGERS

156. Appointment of receiver or receiver-manager.

(1) Where, in the opinion of the Registrar or the High Court, based on the results of an examination undertaken under section 186, it is necessary to appoint a receiver or a receiver-manager to protect the equity of the members, the Registrar or the Court may appoint a receiver or a receiver-manager.

(2) An appeal shall lie to the Court of Appeal against the appointment of a receiver or receiver manager by the Registrar or the High Court within ten days of the appointment.

157. Functions of receiver.

(1) Subject to the rights of secured creditors, a receiver of any property of a co-operative society may

(a) receive the income from the property and pay the liabilities connected with the property; and

(b) realise the security interest of those on whose behalf the receiver is appointed.

(2) Notwithstanding subsection (1) and subject to any order that the Court may make under section 161, a receiver who is not appointed as manager of a co-operative society shall not carry on the business of the co-operative society.

158. Functions of receiver-manager.

Where a receiver of a co-operative society is also appointed manager of the co-operative society, the receiver may carry on any business of the co-operative society to protect the equity of the members. A receiver or receiver-manager appointed by a Court or the Registrar shall be discharged by the Court or Registrar if in the opinion of the Court or Registrar the equity of the members has been sufficiently protected as to enable the cooperative society to be returned to its members.

159. Cessation of Board's powers.

Where a receiver or receiver-manager is appointed by a Court or the Registrar, no directors of the co-operative society shall exercise the directors' powers that the receiver or receiver-manager is authorised to exercise until the receiver or receiver-manager is discharged.

160. Duty of receiver or receiver-manager.

(1) A receiver or receiver-manager appointed by a Court shall act in accordance with any directions of the Court.

(2) A receiver or receiver-manager appointed by the Registrar shall act in accordance with any directions of the Registrar.

(3) A receiver or receiver-manager shall

(a) act honestly and in good faith, and

(b) deal with any property of the co-operative society in his or her possession or control in a commercially reasonable manner.

161. Directions by court.

Upon an application by a receiver or a receiver-manager of a co-operative society, whether appointed by the Court or the Registrar, the Court may make any order it thinks fit, on any matter including

(a) appointing, replacing or discharging a receiver or receiver-manager and approving his or her accounts;

(b) determining the notice to be given to any person or dispensing with notice to any person;

(c) fixing the remuneration of the receiver or receiver-manager;

(d) requiring the receiver or receiver-manager

(i) to make good any default in connection with his custody or management of the property and business of the co-operative society; and

(ii) to relieve the receiver or receiver-manager from any default on any terms that the court considers appropriate;

(e) confirming any act of the receiver or receiver-manager; and

(f) giving directions on any other matter relating to the duties of the receiver or receiver manager.

162. Directions by Registrar.

(1) Where a receiver or a receiver-manager is appointed by the Registrar, the receiver or receiver-manager may apply to the Registrar for directions on any matter relating to his or her duties.

(2) Where the Registrar receives an application under subsection (1), it may make any order it considers appropriate, including any order similar to an order described in sections 161(c) to (f).

163. Required actions of receiver.

A receiver or receiver-manager shall

(a) in the case of a receiver or receiver-manager appointed by the Court, immediately notify the Registrar of his or her appointment or discharge;

(b) take into his or her custody and control the property of the cooperative society in accordance with the Court order or the order of the Registrar under which he or she is appointed;

- (c) open and maintain a bank account in his or her name as receiver or receiver-manager of the co-operative society for the moneys of the co-operative society coming under his or her control;
- (d) keep detailed accounts of all transactions carried out by him or her as receiver or receiver-manager;
- (e) keep accounts of his or her administration that he or she shall cause to be available during usual business hours for inspection by the directors of the co-operative society, the Registrar or any person authorised by the Registrar;
- (f) prepare at least once in every six-month period after the date of his or her appointment financial statements of his or her administration, as far as is practicable in the form required in section 130;
- (g) on completion of his or her duties, render a final account of his or her administration in the form he or she has adopted for preparation of interim accounts under paragraph (f); and
- (h) file with the Registrar a copy of any financial statement mentioned in paragraph (f) and any final account mentioned in paragraph (g) within fifteen days of the preparation of the financial statement or rendering of the final account.

PART XI DISSOLUTION

164. Dissolution by members.

- (1) Subject to the approval of the Registrar, the members of a co-operative society may authorise the dissolution of the co-operative society.
- (2) The Board shall cause a notice of a special meeting of members to be sent in the manner prescribed in section 46 to each member for the purpose of authorising dissolution.
- (3) Each member of the co-operative society has the right to vote with respect to dissolution.
- (4) For the purpose of subsection (1) dissolution is authorised when the members approved the dissolution by a special resolution of the membership.
- (5) Where the Registrar
 - (a) receives notice, in a form satisfactory to it, of an authorisation to dissolve a co-operative society; and
 - (b) is satisfied that it is in the best interest of the co-operative society and its members, the Registrar shall approve the dissolution.
- (6) The special resolution under subsection (4) shall set out
 - (a) the assets and liabilities of the co-operative society;
 - (b) the claims of any creditors;
 - (c) the number of members; and
 - (d) the nature and extent of the members' interest in the co-operative society.
- (7) Subject to subsection (9), where a co-operative society has an unallocated surplus and the authorisation approved under subsection (4) states that it is not to be paid out at the time of the co-operative society's dissolution, the unallocated surplus shall be paid to one or more trustees who are
 - (a) named in the special resolution; or
 - (b) where not named in the special resolution, appointed by the Registrar.
- (8) The trustees named or appointed pursuant to subsection (7) shall
 - (a) deposit the money in a special trust account
 - (i) in a co-operative society; or

(ii) in any financial institution licensed under the Banking Act, 2004 or any company registered under the Insurance Act, No. 8 of 2009; or

(b) invest the money in

(i) securities issued by the Government;

(ii) securities the payment of interest on which is guaranteed by the government; or

(iii) any other manner authorised by the Registrar.

(9) Where a trust is created under subsection (7), the income and principal of the trust shall be expended within a period of twenty years from the date that the trust was established for any cooperative purpose the Registrar considers fit.

(10) In this section

(a) "interest" includes the interest of a member in a co-operative society and includes member loans and obligations of any kind that

(i) arise by virtue of the bye-laws of the co-operative society; and

(ii) are owed by the co-operative society to the members; and

(b) "unallocated surplus" includes any net proceeds from the sale of assets on dissolution of the co-operative society after the liabilities of the co-operative society and the claims of creditors and members have been satisfied.

165. Notice of dissolution by members.

(1) When the Registrar approves a special resolution passed under section 164, the Registrar shall, at the expense of the co-operative society, cause a notice of the special resolution to be published

(a) in the Gazette; and

(b) once a week for two weeks in a newspaper published and circulated in Saint Christopher and Nevis.

(2) Notwithstanding subsection (1), where the Registrar receives an affidavit from the officers of a co-operative society stating that the co-operative society has no assets and no liabilities and it is satisfied that it is appropriate, the Registrar may

(a) exempt the co-operative society from subsection (1); and

(b) cause, at the Registrar's expense, a notice of the special resolution passed under section 164(1) to be published in the Gazette.

(3) The Registrar shall require from a co-operative society, liquidator or trustee appointed by a co-operative society or any other person who is required to provide information, an annual or other return showing

(a) the progress of dissolution;

(b) the distribution of any undistributed surplus or reserve;

(c) the progress of the administration of a trust established in accordance with this section; and

(d) any other information that it may require.

166. Dissolution by Registrar.

(1) Where the Registrar has reasonable cause to believe that a co-operative society

(a) has not commenced business within twelve months after the date shown on its certificate of registration; or

(b) has not carried on business for twelve consecutive months, the Registrar shall send to the secretary of the co-operative society a letter inquiring whether the co-operative society is carrying on business, is in operation or is submitting an annual return.

(2) Where the Registrar does not, within one month of the date he or she sent

a letter under subsection (1), receive an answer to the letter, the Registrar shall, within fourteen days after the expiry of the month, send to the secretary of the co-operative society a letter referring to the letter sent under subsection (1) and stating that

(a) no answer to that letter has been received by the Registrar; and
(b) if an answer is not received to the letter sent under this subsection within one month from the date it is sent, a notice will be published in the Gazette to strike the name of the co-operative society off the Register and to dissolve the co-operative society.

(3) Where the Registrar

(a) receives an answer from a co-operative society that it is not carrying on business or is not in operation or will not be submitting an annual return; or

(b) does not, within one month after the date that the Registrar sent a letter under subsection (2), receive an answer to that letter, the Registrar shall publish in the Gazette and send to the co-operative society a notice that, at the expiry of one month from the date of that notice, the co-operative society will, unless cause is shown to the contrary, be struck off the register and the co-operative society will be dissolved.

(4) At the expiry of the period mentioned in a notice sent under subsection (3), the Registrar shall, unless cause to the contrary is previously shown by the co-operative society

(a) where the Registrar is satisfied that the co-operative society has no assets or liabilities, issue a certificate of dissolution in the prescribed form; or

(b) appoint a liquidator to dissolve the co-operative society.

167. Dissolution for failure to account for business.

(1) Where a co-operative society fails to provide a copy of the annual financial statements to its members at an annual or special meeting called for that purpose or within a period of twelve months after the close of its financial year, the Registrar

(a) may require the directors to call a special meeting of the cooperative society for the purpose of considering the business transacted during the preceding financial year and for the providing to the members and to the Registrar a copy of the annual financial statement; and

(b) shall, where the Registrar requires a special meeting to be called under paragraph (a), determine a time period within which the special meeting is to be called.

(2) Where the directors fail to call a special meeting within the time period set out in subsection (1), the Registrar may call the special meeting

(a) to review the financial position of the co-operative society and the members' interests in the co-operative society; and

(b) to ascertain whether the members wish to continue the business of the co-operative society and to comply with sections 130 and 132.

(3) Where

(a) a quorum of members is not present at a special meeting called under subsection (2); or

(b) the members fail to pass a resolution to the effect that the co-operative society is to carry on business and to comply with section 130 and 132, the Registrar shall notify the directors that, unless sections 130 and 132 are complied with within one month from the date of the notice, the co-operative society will be struck off the register and dissolved.

(4) Notwithstanding subsection (3), the Registrar may extend the period for compliance with sections 130 and 132.

(5) Where a co-operative society does not comply with sections 130 and 132 within the period mentioned in subsection (3) or set by the Registrar under subsection (4) the Registrar shall

(a) where the Registrar is satisfied that the co-operative society has no assets or liabilities, issue a certificate of dissolution in the prescribed form; or

(b) appoint a liquidator to dissolve the co-operative society.

168. Dissolution by Court.

(1) The Registrar or an interested person may, after giving the co-operative society three months notice of the proposed application, apply to the Court for an order dissolving a co-operative society, if the co-operative society

- (a) obtained its registration by fraud or mistake;
- (b) exists for an illegal purpose;
- (c) has wilfully, after notice by the Registrar, violated any of the provisions of this Act, the Regulations or its bye-laws;
- (d) is no longer operating on co-operative principles; or
- (e) has the number of its members reduced below the minimum number required by this Act for the co-operative society.

(2) Where an interested person applies under this section, he or she shall give the Registrar notice of his or her application and the Registrar shall be entitled to appear and be heard and represented either by a member of staff of the Registrar or by an attorney-at-law.

(3) Where the Court receives an application under this section, the Court may order that the co-operative society be dissolved or liquidated and dissolved under the supervision of the Registrar.

(4) Where the Registrar receives an order made under subsection (3), the Registrar shall

- (a) where the order is to dissolve the co-operative society, issue a certificate of dissolution in the prescribed form; or
- (b) where the order is to liquidate and dissolve the co-operative society under the supervision of the Registrar, publish a notice in the Gazette.

169. Revival of dissolved co-operative society.

(1) Where a co-operative society has been dissolved under this Part, any interested person may apply to the Registrar to have the co-operative society revived by submitting to the Registrar

- (a) an application for revival in such form as the Registrar may approve; and
- (b) such other information as the Registrar may require.

(2) Where the Registrar receives an application for revival under subsection (1) and the Registrar is satisfied that the co-operative society is in compliance with this Act, the Registrar may

- (a) issue a certificate of revival in the prescribed form and publish notice of the revival in the Gazette; and
- (b) impose any conditions on the co-operative society that it considers reasonable with respect to the co-operative society.

(3) A co-operative society is revived on the date shown in the certificate of revival.

(4) Where a co-operative society is revived under this section, it

- (a) shall have all the rights and privileges; and
- (b) shall be liable for the obligations, that it would have had if it had not been dissolved, subject to any terms that may be imposed by the Registrar and to any rights acquired by any person after its dissolution.

170. Appointment of liquidator.

(1) Where

- (a) a co-operative society is to be dissolved under this Part; or
- (b) no liquidator is appointed by the members or the Court; the Registrar may appoint a liquidator to wind up the affairs of the co-operative society.

(2) Notwithstanding subsection (1), where the Registrar is satisfied that the co-operative society has no assets and liabilities, he may issue a certificate of dissolution in the prescribed form.

171. Commencement of liquidation.

The liquidation of a co-operative society commences where

- (a) a special resolution for dissolution of the co-operative society is approved by the Registrar under section 164;
- (b) the Registrar appoints a liquidator under section 166 or 167;
- (c) the Court makes an order to dissolve under section 168; or
- (d) the registration of a co-operative society is cancelled by the Registrar under sections 18 or 23 of this Act.

172. Cessation of business.

From the date of the commencement of its liquidation

- (a) a co-operative society continues in existence, but shall cease to carry on its business except insofar as may be required, in the opinion of the liquidator, for an orderly liquidation; and
- (b) any transfer of shares, other than a transfer made to or with the approval of the liquidator, and any alteration in the status of the members made after commencement of the liquidation shall be void.

173. General provisions respecting liquidators.

(1) Where two or more liquidators are appointed, all the provisions in this section with respect to a liquidator apply to all of the liquidators.

(2) On the appointment of a liquidator under this Part, all the powers of the directors vest in the liquidator.

(3) A liquidator may delegate any of the powers vested in him or her under subsection (2) to the directors or members.

(4) Where the members of a co-operative society appoint a liquidator, they may, at that time or at a subsequent general meeting, pass a resolution giving direction to the liquidator with respect to the disposal of the property of the co-operative society.

(5) Where

(a) the members appoint a liquidator and do not issue direction under subsection (4); or

(b) a liquidator is not appointed by the members, the liquidator is subject to the directions, orders and instructions of the Registrar with respect to the mode and terms and conditions on which the liquidator may dispose of the whole or any part of the property of the co-operative society.

(6) Where a vacancy in the office of liquidator occurs, the Registrar may appoint another person to fill the vacancy.

(7) In all proceedings connected with the co-operative society, the liquidator is to be described as the liquidator of the co-operative society and not by his or her individual name only.

174. Duties of liquidator.

On his or her appointment, a liquidator shall

(a) immediately give notice of his or her appointment-

- (i) in the case of a liquidator not appointed by the Registrar, to the Registrar; and
- (ii) to each claimant and creditor known to the liquidator;

- (b) immediately publish notice of his appointment in the Gazette and once a week for two consecutive weeks in a newspaper published and circulated in Saint Christopher and Nevis;
- (c) set out in the notice mentioned in paragraphs (a) and (b) a provision requiring any person
 - (i) indebted to the co-operative society, to render an account and pay to the liquidator at the time and place specified;
 - (ii) possessing property of the co-operative society, to deliver it to the liquidator at the time and place specified; and
 - (iii) having a claim against the co-operative society, whether liquidated, unliquidated, future or contingent, to present particulars of the claim in writing to the liquidator not later than two months after the first publication of the notice;
- (d) take into his or her custody and control the property of the cooperative society;
- (e) open and maintain a trust account for the monies of the co-operative society;
- (f) maintain separate lists of the members, creditors and other person having claims against the co-operative society;
- (g) where at any time the liquidator determines that the co-operative society is unable to pay or adequately provide for the discharge of its obligations, apply to the Registrar for directions; and
- (h) deliver to the Registrar and the co-operative society, at least once in every twelve-month period after his or her appointment or more often as the Registrar may require, financial statements of the co-operative society in the form required in section 130 or in any form that the liquidator considers proper or that the Registrar may require.

175. Powers of liquidator.

- (1) The liquidator may
 - (a) retain attorneys-at-law, accountants, engineers, appraisers and other professional advisors;
 - (b) bring, defend or take part in any civil, criminal or administrative action or proceeding in the name and on behalf of the co-operative society;
 - (c) carry on the business of the co-operative society as required for an orderly liquidation;
 - (d) sell by public auction or private sale any property of the co-operative society; or
 - (e) do all acts and execute any documents in the name and on behalf of the co-operative society;
 - (f) borrow money on the security of the property of the co-operative society;
 - (g) settle or compromise any claims by or against the co-operative society; and
 - (h) do all other things that he considers necessary for the obligation of the co-operative society and distribution of its property.
- (2) Where a liquidator has reason to believe that a person has in his or her possession or under his or her control or has concealed, withheld or misappropriate any property of the co-operative society, he may apply to the Court for an order requiring that person to appear before the Court at the time and place designated in the order and to be examined.
- (3) Where the examination mentioned in subsection (2) discloses that a person has concealed, withheld or misappropriate property of the co-operative society, the court may order that person to restore the property or pay compensation to the liquidator on behalf of the co-operative society.
- (4) A liquidator shall purchase, directly or indirectly, any part of the stock-in-trade, debts or assets of the co-operative society.

176. Limitation on liability of liquidator.

A liquidator shall not be liable where he or she relies in good faith on

- (a) financial statements of the co-operative society represented to him or her
 - (i) by an officer of the co-operative society; or
 - (ii) by the auditor of the co-operative society in a written report that states that the financial statements reflect fairly the financial condition of the co-operative society; or
- (b) an opinion or statement of an attorney-at-law, accountant, engineer, appraiser or other professional advisor retained by the liquidator.

177. Costs of liquidation.

- (1) A liquidator shall pay costs of liquidation out of the property of the co-operative society and shall pay or make adequate provision for all claims against the co-operative society.
- (2) After the date specified by the liquidator for distribution under section 174(c)(iii), the liquidator may distribute all or any part of the assets of the co-operative society among the parties entitled to the assets having regard to the claims of which the liquidator has notice.
- (3) The liquidator shall not be liable for any part of the assets of the co-operative society distributed under subsection (2) to any person notice of whose claims the liquidator did not have at the time of distribution.
- (4) When distributing the assets of a co-operative society under this section, the liquidator shall pay, in priority to the claims of the creditors of the co-operative society, the wages or salaries of all persons employed by the co-operative society at the time of the commencement of the obligation or within one month before, not greater than three months' wages or salary, and those persons are entitled to rank as creditors of the co-operative society for any residue of the claims.

178. Closure of liquidation.

- (1) In the liquidation of a co-operative society the funds, including the statutory reserves, shall be applied
 - (a) firstly to the cost of liquidation;
 - (b) secondly to the discharge of the liabilities of the co-operative society;
 - (c) thirdly to the payment of share capital; and
 - (d) fourthly, if the bye-laws of the co-operative society permit, to the payment of a dividend at a rate not exceeding 10% per annum for any period during which no distribution of surplus has been made.
- (2) Any surplus remaining after the application of the funds to the purposes specified in subsection (1) may, at the discretion of the Registrar, be used for any cooperative purpose the Registrar considers fit.
- (3) Where the liquidation is closed in accordance with subsection (1), the Registrar shall
 - (a) issue directions with respect to the custody or disposal of the documents and records of the co-operative society; and
 - (b) discharge the liquidator.
- (4) Where the Registrar discharges a liquidator under subsection (3), the Registrar shall issue a certificate of dissolution in the prescribed manner.
- (5) The co-operative society shall cease to exist on the date shown in the certificate of dissolution.

179. Custody of records.

A person who has been granted custody of the documents and records of a dissolved co-operative society remains liable to produce those documents and records for six years following the date of its dissolution or until the expiry of any other shorter period that the Registrar may set.

180. Remuneration of liquidator.

- (1) Where there is no agreement or provision fixing the remuneration of a liquidator, the liquidator shall be entitled to a commission based on the net proceeds of the estate of the co-operative society realised after deducting his or her expenses and disbursements.
- (2) The amount of the commission mentioned in subsection (1) shall be equal to
 - (a) 5% on the first \$1,000 realised;
 - (b) 2.5% on the next \$4,000 realised; and
 - (c) 1.25% on any sum greater than \$5,000 realised.
- (3) Where a liquidator applies to the Registrar, the Registrar may increase the amount of commissions set out in subsection (2).
- (4) A liquidator is entitled to any fee or charge for his or her services in addition to the commission allowed under this section.

181. Continuation of actions.

- (1) Notwithstanding the dissolution of a co-operative society under this Act
 - (a) a civil, criminal or administrative action or proceeding commenced by or against, the co-operative society before its dissolution may be continued as if the co-operative society had not been dissolved;
 - (b) a civil, criminal or administrative action or proceeding may be brought against the co-operative society within two years after its dissolution as if the co-operative society had not been dissolved; and
 - (c) any property that would have been available to satisfy any judgment or order if the co-operative society had not been dissolved shall remain available for that purpose.
- (2) Service of a document on a co-operative society after its dissolution may be effected by serving the document on a person shown on the records of the Registrar as one of the last directors of the co-operative society.
- (3) Notwithstanding the dissolution of a co-operative society, a person to whom any of its property has been distributed is liable to any person claiming under subsection (1) to the extent of the amount received by that person on the distribution with respect to any share of the co-operative society that that person held, and an action to enforce such liability may be brought within two years after the date of dissolution of the co-operative society.

182. Unknown claimants or members.

- (1) On the dissolution of a co-operative society, the liquidator shall convert into money the portion of the property distributable to a creditor or member who cannot be found after a reasonable investigation and shall deposit the money in a co-operative society or with trustees appointed by the Registrar.
- (2) A payment under subsection (1) shall be in satisfaction of a debt or claim of such creditor or member.
- (3) Where a creditor establishes within three years after the dissolution of a co-operative society that he or she is entitled to any money paid under subsection (1) to a co-operative society or to trustees appointed by the Registrar, the co-operative society or the trustees shall pay the amount of the claim out of the monies deposited.
- (4) Where moneys deposited under this section are not distributed within three years after the dissolution of a co-operative society then, subject to the approval of the Registrar, the co-operative society or the trustees appointed by the Registrar shall distribute those monies in accordance with sections 178(2) or the bye-laws.

183. Power of Registrar to surcharge.

- (1) Where, in the course of the dissolution of a co-operative society it appears that any person who has taken part in the organisation or management of the co-operative

society or any past or present officer of the co-operative society has misapplied or retained or become liable or accountable for any money or property of the co-operative society or has been guilty of misfeasance or breach of trust in relation to the co-operative society, the Registrar may, on the application of the liquidator or of any creditor or contributor, carry out an examination into the conduct of such person and make an order requiring the person to repay or restore the money or any part thereof with interest at such rate as the Registrar may think just or to contribute such sum to the assets of such co-operative society by way of compensation in regard to the misapplication, retainer, dishonesty or breach of trust as the Registrar may think just.

(2) This section shall apply notwithstanding that the act is one for which the offender may be criminally responsible.

184. Appeal against surcharge.

Any person aggrieved by an order of the Registrar made under section 183 may appeal to the Tribunal within twenty-one days from the date of such order and the decision of the Tribunal shall be final on any question of fact.

185. Application of Part XI.

(1) This part does not apply to a co-operative society that is bankrupt within the meaning of the Bankruptcy Act, Cap.5.04.

(2) Where a co-operative society is at any time found, in proceedings under the Bankruptcy Act, Cap.5.04 to be bankrupt within the meaning of that Act, any proceedings taken under this Part to dissolve or to liquidate and dissolve the co-operative society shall be stayed.

PART XII

EXAMINATIONS AND INVESTIGATIONS

186. Examinations.

(1) In addition to the powers of routine inspection under sections 5(4) and 22(1) the Registrar may appoint a person as examiner who shall make an examination of the records and the affairs of the co-operative society.

(2) In its request for an examination under this section, the Registrar may set such limits and conditions on the scope and conduct of the examination as the Registrar considers appropriate; and, in carrying out the examination, the powers of the examiner under the provisions of this section shall be limited accordingly.

(3) An examiner requested by the Registrar to carry out an examination under this section may, on production of the examiner's authorisation to any person concerned, at all reasonable times inspect and take copies of, or extracts from, any books or documents relating to a co-operative society, and for any of those purposes may enter any premises at which any such books or documents are kept.

(4) For the purposes of exercising his or her powers under subsection (3) to take copies or extracts, an examiner may remove from the premises concerned, for such period and on such conditions, if any, as to facilitate access by officers of the co-operative society, as may be reasonably necessary, to any books or documents referred to in that subsection.

(5) An examiner who is carrying out an examination under this section in relation to a co-operative society may, with the approval of the Registrar, and subject to any limits imposed by that approval, carry out a similar examination in relation to any other body, whether a co-operative society or not, which is or has been at any relevant time been associated with the first-mentioned co-operative society, and for that purpose the

examiner may exercise, in relation to any such body, any power conferred by subsections (3) and (4).

(6) Where an examination is carried out under this section, the examiner shall make a report of the examination to the Registrar.

(7) Where required to do so by notice in writing served by the Registrar at any time or by an examiner in the course of an examination

(a) a co-operative society;

(b) any person who is or has been a director, member, agent or liquidator of a co-operative society; and

(c) any other person who has in his or her possession or power any books or documents relating to a co-operative society, shall provide the Registrar or the examiner such books, documents or information as may be specified in the notice which relate to the co-operative society and are in his or her possession.

(8) If required to do so by notice in writing served on it by the Registrar or by an examiner, a co-operative society shall provide to the Registrar or the examiner a financial statement or periodic financial statements in such form and containing such information as may be specified in the notice.

(9) If a notice under subsection (7) or (8)

(a) requires that any item or information is to be furnished within a period, or a time or place specified in the notice; or

(b) requires that any information is to be verified by a statutory declaration, the co-operative society or person on whom the notice is served shall not be regarded as complying with the notice unless that requirement is also complied with.

(10) The Registrar or examiner may take copies of or extracts from any item produced in compliance with a notice under subsection (7) or (8) and if so required by the Registrar or examiner, the person on whom a notice under subsection (7) was served or, in the case of a statement produced in compliance with a notice under subsection (8), a person who is or has been a director, committee member, member, agent or liquidator of the co-operative society shall provide any explanation which may reasonably be required of an item so produced.

(11) Where a person on whom a notice is served under subsection (7) does not have in his or her possession or under his or her control an item specified in the notice but knows where it is, the person shall not be regarded as complying with the notice unless he or she states to the best of his or her knowledge and belief where the item is and, if so required, verifies that information by a statutory declaration.

(12) The production by any person of any item forming part of the books and documents of a co-operative society shall not prejudice any lien which that person claims over that item; but nothing in this section shall compel

(a) the production by an attorney-at-law of any document containing a privileged communication made by or to him or her in that capacity; or

(b) the provision of information contained in a privileged communication so made.

(13) A person who contravenes subsection (7) or (8) commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding ten thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.

(14) If the Registrar considers it just and so requires by notice in writing, all or any of the expenses incurred by the Registrar in exercising his or her powers under subsection (7) shall be met, either wholly or to such extent as the Registrar may so require

(a) out of the funds of the co-operative society; or

(b) by the directors or former directors of the co-operative society or any of them, and any sum which a co-operative society or other person is required to pay by a notice under this subsection shall be recoverable summarily by the Registrar as a civil debt.

(15) For the purpose of this section “agent” in relation to a co-operative society, includes its bankers, accountants, attorneys-at-law, auditors and its financial and other advisers.

(16) Subject to subsection 227(3), a director, committee member, employee or agent of a co-operative society shall not

(a) obstruct any person who is carrying out an examination under this Act; or

(b) obstruct the examination of a co-operative society undertaken under this Act.

(17) A director, committee member, employee or agent of a co-operative society who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding twenty thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both.

187. Investigations.

(1) Where

(a) an application is made to the Registrar by the lesser of twenty-five members or ten per cent of the membership of a co-operative society, each of whom has been a member of the co-operative society throughout the period of twelve months ending on the date of the application; and

(b) the Registrar is of the opinion that it is necessary to do so in the interests of the orderly and proper regulation of the business of a cooperative society, the Registrar may appoint one or more investigators to investigate the affairs of the cooperative society.

(2) An application under subsection (1)(a) shall be supported by such evidence as the Registrar may require for the purpose of showing that the applicants

(a) have good reason for requiring the investigation to be made; and

(b) have not been actuated by malicious motives in their application, and if so required by the Registrar the applicants shall deposit with it, prior to, and as security for the costs of, the investigation such sum as it may reasonably require.

(3) If an investigator appointed under this section to investigate the affairs of a co-operative society thinks it necessary for the purpose of the investigation to investigate also the affairs of any other body, whether a co-operative society or not, which is or has at any relevant time been associated with the principal co-operative society, the investigator may do so with the approval of the Registrar.

(4) A notice of an application under subsection (1)(a) as the Registrar may require shall be given to the co-operative society concerned and, where applicable, to any other body whose affairs are to be investigated by virtue of subsection (3).

(5) Before appointing an investigator under this section, the Registrar shall, if the Registrar is of the opinion that it would not be prejudicial to the interests of the members or creditors of the co-operative society, notify the co-operative society in writing of the action which the Registrar proposes to take and of the grounds on which the Registrar proposes to take it and, in such case, the Registrar shall have regard to any explanatory statement in writing which may be given by the co-operative society within fourteen days from the receipt of the notification.

(6) In the case of an investigation, the expenses may be defrayed in the first instance by the office of the Registrar, but it shall be entitled to be repaid these expenses

(a) where the investigation results from an application under subsection (1)(a), by the applicants, to such extent, if any, as the Registrar may direct;

(b) in any case, by the co-operative society or the other body, to such extent, if any, as the Registrar may direct; and

(c) in any case, by a person convicted of an offence in proceedings instituted as a result of the investigation, to such extent, if any, as the court by which the person was convicted

may order, and a person liable under any of paragraphs (a) to (c) shall be entitled to contributions from any other person liable under the same paragraph according to the amount of their respective liabilities.

(7) Where an examination undertaken pursuant to this section reveals substantial irregularities in the business of the co-operative society, the Registrar may choose not to direct any members on whose motion the examination was commenced to defray the expenses.

188. Investigations by Court

(1) A member, the Registrar or any interested person may apply ex parte, or on any notice that the Court may require, to the Court for an order directing an investigation to be made of the co-operative society and any of its member co-operative societies.

(2) On an application under subsection (1), the Court may order an investigation of a co-operative society or of any of its member co-operatives where it appears to the Court that

(a) the co-operative society is not fulfilling the purpose stated in its bye-laws;

(b) the co-operative society is not carrying on business in accordance with this Act, the Regulations or the bye-laws;

(c) the co-operative society is not organised or being operated on cooperative principles;

(d) the business of the co-operative society or any of its member cooperative societies is or has been carried out with intent to defraud any person;

(e) the business or affairs of the co-operative society or any of its member co-operative societies are or have been carried on or conducted, or the powers of the directors are or have been exercised, in a manner that is oppressive or unfairly prejudicial to or that has unfairly disregarded the interests of a member or of a security holder;

(f) the co-operative society or any of its member co-operative societies was formed for a fraudulent or unlawful purpose or is to be dissolved for a fraudulent or unlawful purpose; or

(g) persons concerned with the formation, business or affairs of the cooperative society or any of its member co-operative societies have acted fraudulently or dishonestly, in connection with the co-operative society.

(3) An applicant for an order under this section is not required to give security for costs.

(4) An ex parte application under this section shall be heard in camera.

(5) A person shall not publish anything relating to ex parte proceedings conducted under this section other than with the authorisation of the Court or the written consent of the co-operative society being investigated.

189. Court order.

In connection with an investigation under section 188(1), the Court may make any order it considers appropriate, including an order

(a) to investigate;

(b) appointing an investigator, who may be an employee of the Registrar, fixing the remuneration of an investigator and replacing an investigator;

(c) determining the notice to be given to any interested person or dispensing with notice to that person;

(d) authorising an investigator to enter any premises in which the Court is satisfied there might be relevant information, and to examine anything and make copies of any document or record found on the premises;

(e) requiring any person to produce documents or records to the investigator;

(f) authorising an investigator to conduct a hearing, administer oaths and examine any person on oath, and prescribing rules for the conduct of the hearing;

(g) requiring any person to attend a hearing conducted by an investigator and to give evidence on oath;

- (h) giving directives to an investigator or any interested person on any matter arising in the investigation;
- (i) requiring an investigator to make an interim or final report to the Court and to the Registrar;
- (j) determine whether a report of an investigator made under paragraph (i) should be published and, where published, ordering the Registrar to publish the report in whole or in part or to send copies to any person the court designates;
- (k) requiring an investigator or an examiner appointed under section 186 to discontinue an investigation; and
- (1) requiring the co-operative society or a person who made an application under section 188(1) for an order to pay the costs of the investigation.

190. Powers of investigator.

- (1) An investigator appointed under section 189(b) shall have the powers set out in the order appointing him or her.
- (2) In addition to the powers set out in the order appointing an investigator, the investigator may provide to, or exchange information and otherwise co-operate with, any public official in Saint Christopher and Nevis or elsewhere who
 - (a) is authorised to exercise investigatory powers; and
 - (b) is investigating, with respect to the co-operative society, an allegation of improper conduct that is the same as or similar to the conduct described in section 188(2).

191. Hearing in camera.

- (1) An interested person may apply to the Court for an order that a hearing conducted by an investigator appointed under section 189 be heard in camera and for directions on any matter arising in the investigation.
- (2) A person whose conduct is being investigated or who is being examined at a hearing conducted by an investigator appointed under section 189(b) has a right to be represented by an attorney -at-law.

192. Incriminating evidence.

- (1) A person shall not be excused from attending and giving evidence and producing documents and records to an investigator appointed under section 189(b) by reason only that the evidence tends to incriminate the person or subject the person to any proceedings or penalty.
- (2) Evidence described in subsection (1) shall not be used or received against any person in any proceeding instituted against the person, other than a prosecution for perjury in giving evidence.

193. Absolute privilege respecting statements.

- (1) An oral or written statement or report made during the course of, or as the result of, an investigation or examination authorised by this Part by an investigator or an examiner, or by any other person acting in accordance with powers conferred by this Part in respect of an investigation or examination, shall have absolute privilege.
- (2) Nothing in this Part affects the privilege that exists in respect of an attorney-at-law and his or her client.

**PART XIII
DISPUTES**

194. Settlement of disputes.

- (1) Where any dispute that relates to the business of a co-operative society arises
- (a) among members, former members and persons claiming through members or deceased members;
 - (b) between a member, former member or person claiming through a member or a deceased member, and the co-operative society, its Board, or any officer of the co-operative society;
 - (c) between the member and the co-operative society arising out of or under any bye-law relating to the disposal of the produce of agricultural or animal husbandry, or under any contract made under this Act;
 - (d) between the co-operative society and any other co-operative society; or
 - (e) between the co-operative society and its Board, committee member or employee, any party to the dispute may refer it to the Registrar for decision.
- (2) The Registrar may, before proceeding to hear or determine a dispute, make or cause to be made a preliminary investigation
- (a) to ascertain the cause;
 - (b) to define the issues; and
 - (c) to bring about a voluntary settlement between the parties to the dispute.
- (3) The Registrar may either hear the dispute or delegate authority to hear the dispute to an employee or an office holder, and make and issue a decision, or it may appoint an arbitrator, who shall be an attorney-at-law of at least five years standing, to do so.
- (4) For the purposes of hearing any dispute the Registrar or the arbitrator appointed by the Registrar
- (a) may administer oaths; and
 - (b) may require
 - (i) the attendance of all parties concerned and witnesses; and
 - (ii) the production of all books, documents and things relating to the dispute.
- (5) The Registrar or the arbitrator may order the expenses of determining any dispute, including fees to a barrister and solicitor, to be paid by the co-operative society or by any of the parties to the dispute.
- (6) A party aggrieved by a decision of the Registrar or an arbitrator may appeal to the Tribunal within such time and in such manner as may be prescribed.
- (7) Notwithstanding anything in this section, a co-operative society may exercise any rights arising by law under any charges, mortgages, bills of sale or other securities duly executed in accordance with this Act or any other law without recourse to arbitration.
- (8) For the purposes of subsection (1), a claim by a co-operative society for any debt or demand due to it from a member, former member or the personal representative of a deceased member is a dispute that relates to the business of a co-operative society within the meaning of subsection (1).

195. Co-operative Societies Appeals Tribunal.

- (1) There shall be a Co-operative Societies Appeals Tribunal which shall consist of three persons, one of whom shall be an attorney-at-law of at least five years standing.
- (2) The Tribunal shall have jurisdiction to hear appeals against a decision of the Registrar or an arbitrator.
- (3) Schedule 1 shall have effect with respect to the constitution and procedure of the Tribunal.

196. Case stated on question of law.

- (1) In accordance with the Arbitration Act, Cap 3.01, and notwithstanding anything contained in sections 194 and 195, the Registrar or an arbitrator may, in the course of or

on making a decision in a dispute, refer a question of law arising therefrom to the Court, by way of case stated for the opinion of that Court.

(2) A judge may consider and determine any question of law so referred and the opinion given on such question shall be final and binding.

197. Enforcement of award and recovery of loans.

(1) An award by the Registrar or an arbitrator may, by leave of the Court, be enforced in like manner as a judgment or order of the Court, and where leave is so given, judgment may be entered in terms of the award.

(2) Where a dispute relates to the recovery of a loan made by a co-operative society to a member of that co-operative society, such a dispute may, notwithstanding section

194, be brought before the Magistrates' Court.

(3) A magistrate shall have jurisdiction under subsection (2), even though the amount due exceeds the limits of jurisdiction of a magistrate specified in the Magistrates Code of Procedure Act, Cap. 3.17. *100 Co-operatives Societies Act, 2011 – 31.*

PART XIV

SPECIALISED CO-OPERATIVE SOCIETIES

Division I

Credit Unions

198. Functions of Registrar, immunity, sanctions and corrective action.

(1) The Registrar shall administer the system of regulation and supervision of credit unions provided for under this Act with a view to

(a) the protection by each credit union of the funds of its members; and

(b) the maintenance of financial stability and well-being in credit unions generally.

(2) The Registrar shall have power to do anything which, in his or her opinion, is necessary to facilitate the exercise of its functions or is incidental to or consequential on their exercise, and, in the exercise of any such power the Registrar may consult such other bodies as appear to him or her to be expert or knowledgeable in matters relating to credit unions.

(3) The registration of a credit union or the imposition of any prudential, supervisory or reporting requirements or conditions by the Registrar shall not constitute a warranty as to the solvency of the credit union to which registration is given and the Registrar shall not be liable in respect of any losses incurred through the insolvency or default of a co-operative society which is registered as a credit union.

(4) Where after an examination under section 186 or after an investigation under section 187, or on the receipt of any other information the Registrar is of the opinion, that it is necessary to act in the interest of the orderly and proper regulation of the business of a credit union, in addition to the powers conferred by section 5, the Registrar may

(a) place the credit union under administrative supervision; and

(b) take any other necessary action to correct the non-compliance or unsafe or unsound practice, including

(i) prohibiting the disposal, conveying or encumbering of any of the credit union's assets;

(ii) prohibiting the incurring by the credit union of any debt, obligation or liability;

(iii) prohibiting the investing of any of the credit union's funds;

(iv) prohibiting the withdrawal of any of the credit union's accounts at other financial institutions;

(v) suspending the credit union's acquisition of fixed assets;

(vi) suspending or restricting the credit union's lending operations; and

(vii) increasing the credit union's allocation to reserves.

(5) The credit union shall comply with the requirements of the Registrar under subsection (4) and where the credit union fails to do so, the Registrar may appoint an administrator for the credit union, for a period not exceeding twelve months.

(6) If at any time the Registrar determines that the credit union is not in a condition to continue business under the administrator, in the interest of the members, depositors or creditors and in accordance with section 156, the Registrar may appoint a receiver or a receiver-manager for the credit union.

(7) All costs incidental to the period of administrative supervision will constitute an allowable charge against the assets of the credit union and shall be paid as the Registrar may determine.

199. Restrictions, accounting records and directorship.

(1) A credit union shall not underwrite insurance or the issue of securities by another person.

(2) Nothing in subsection (1) shall prevent a credit union from requiring insurance for the security of the credit union.

(3) A credit union shall not demand from a potential borrower that

(a) any additional services, including appraisal valuations or security, be obtained from a specific provider; or

(b) the borrower should utilise any other services of the credit union, as a condition of, or in consideration of, obtaining a loan.

(4) Subject to subsection (5), a credit union may only hold real property, the aggregate market value of which does not exceed ten per cent of its total assets.

(5) Notwithstanding subsection (4), the Registrar may, if the Registrar is satisfied that the circumstances require it, grant approval to a credit union to hold real property in excess of the percentage specified in subsection (4).

(6) Subsection (5) shall not apply where the credit union exercises its legal right in respect of any property which is the security for any debt, and in such a case, the property shall not be retained for a period in excess of five years without the permission of the Registrar unless in the meantime the aggregate value of the real property held by the credit union is reduced to below the percentage specified in subsection (4).

(7) Nothing in subsection (4) shall be interpreted as requiring a credit union

(a) to dispose of any real property that was acquired before the coming into force of this Act; or

(b) to terminate any agreement to acquire or hold any real property where the agreement was entered into before the coming into force of this Act.

(8) Without prejudice to the generality of subsection (1), a credit union may, with the permission of the Registrar, do all other acts and things as are incidental or conducive to or consequential upon the attainment of its objects.

(9) A credit union shall keep reliable accounting records and all supporting documents for a period of at least five years and shall

(a) ensure that its accounting records

(i) correctly explains all transactions;

(ii) enables the financial position of the credit union to be determined with reasonable accuracy at any time; and

(iii) allows for the preparation of financial statements;

(b) include underlying documentation which shall be kept to reflect details of

(i) all sums of money received and expended and the matters in respect of which such receipts and expenditures take place;

(ii) all sales and purchases and other transactions; and

(iii) the assets and liabilities of the credit union.

(10) Every person who is, or is likely to be a director, officer or manager of a credit union must be a fit and proper person to hold the particular position which he holds or is likely to hold.

(11) In determining whether a person is a fit and proper person to hold any particular position, regard shall be given to

(a) that person's probity, competence and soundness of judgment for fulfilling the responsibilities of that position;

(b) the diligence with which that person is fulfilling or is likely to fulfill the responsibilities of that position; and

(c) whether the interests of members of the credit union are, or are likely to be, in any way threatened by that person holding that position.

(12) Without prejudice to the generality of subsections (10) and (11), regard may be given to the previous conduct and activities in business or financial matters of that person in question and, in particular, to any evidence that he or she has

(a) committed an offence involving fraud or other dishonesty or violence;

(b) contravened any provision made by or under an enactment designed for protecting members of the public against financial loss due to dishonesty, incompetence or malpractice by persons concerned in the provision of banking, insurance, investment or other financial services or the management of companies or against financial loss due to the conduct of a discharged or undischarged bankrupt;

(c) engaged in any business practices appearing to the Registrar to be deceitful or oppressive or otherwise improper whether unlawful or not, or which otherwise reflect discredit on that person's method of conducting business;

(d) an employment record which leads the Registrar to believe that the person carried out an act of impropriety in the handling of his or her employer's business; or

(e) engaged in or been associated with any other business practices or otherwise conducted himself in such a way as to cast doubt on his competence and soundness of judgment.

(13) The Registrar may prescribe the form for a personal questionnaire for a fit and proper test which should accompany the application form set out in Schedule 2.

200. Liquid assets.

(1) A credit union shall at all times keep such a proportion of its total assets in liquid form as prescribed in the Regulations as will enable the credit union to meet its liabilities as they arise.

(2) For the purpose of complying with subsection (1) a credit union shall ensure that no less than fifteen per cent or such greater percentage as may be specified by the Registrar from time to time, of its members unencumbered deposits and other short term liabilities, are maintained in a liquidity reserve; but nothing in this Act shall be taken to prevent a credit union keeping liquid assets in addition to those required for complying with subsection (1).

(3) Subject to section 125(1)(b), a credit union shall not capitalise its statutory reserves by way of bonus shares or distribute it by way of dividends.

(4) Despite the provisions of section 125(1)(b), whenever the Board of a credit union so recommend to the members and a majority of the members present and voting at a general meeting by resolution so approve

(a) the allocation to its statutory reserves may be increased; or

(b) if its statutory reserves at the end of the financial year in question equals or exceeds ten per cent of assets, the allocation may be reduced.

201. Loan loss provisions.

- (1) A credit union shall at least annually evaluate the quality and collectability of the loan portfolio and establish adequate loan loss allowance.
- (2) The Registrar may in accordance with International Credit Union and Safety and Soundness Principles or standards prescribed issue guidelines to implement the requirement for an adequate loan loss allowance.

202. Loan approval.

- (1) A loan made by a credit union shall be approved in accordance with the policies established by the directors before any funds are advanced.
- (2) A loan to a director, officer, committee member or an employee of a credit union or an associate of any of them, shall be approved in the manner prescribed.
- (3) A person who knowingly approves or grants a loan by a credit union in contravention of this Act or the Regulations shall be held liable for any losses resulting to the credit union in connection with that loan.

203. Security for loans.

- (1) Subject to any restrictions that may be prescribed in the Regulations, a credit union may take any security for loans and other risk assets that it considers advisable and in keeping with sound business and risk management practices.
- (2) For the purposes of this section, "risk assets" means loans, investments and other property of the co-operative society with possible loss results, which form the basis of determining the amount of the co-operative society's income to be set aside as provision for loss.

204. Loan limits.

The limits on the amount of loans made by a credit union shall be in accordance with section 121.

205. Reporting loans.

- (1) Where a credit union is reporting loans, it shall report the loans at their fair value deducting provision for loan impairment on the balance sheet in its annual financial statements under section 201.
- (2) Any advance given by way of overdraft or line of credit is deemed to be a loan for the purposes of the balance sheet and shall be reported as a loan.

206. Interest on loans.

- (1) The maximum intervals at which interest on loans made by a credit union are to be paid may be prescribed in the Regulations.
- (2) The rate of interest to be charged on loans shall be fixed from time to time by the Board.
- (3) Where a borrower has not paid the interest on a loan for a period determined in the Regulations, the credit union shall not include that interest in income.

207. Acceptance of deposits.

- (1) Subject to section 123, a credit union may accept deposits
 - (a) from members;
 - (b) from other co-operative societies;
 - (d) from government and non-government agencies; and
 - (e) bodies corporate.

(2) Deposits may be accepted in the manner and form and on any condition that may be prescribed in the Regulations.

208. Credit unions and trusts.

(1) A credit union is not bound to see to the execution of any trust, whether express, implied or constructive, to which any deposit or share is subject.

(2) Where any deposit or share is subject to a trust of which the credit union has notice, the receipt or order

(a) of the trustee in whose name the deposit or share stands; or

(b) if the deposit or share stands in the names of two or more trustees, all those trustees or any of them who, under the document creating the trust, may be entitled to receive the deposit or share, is, notwithstanding any trust to which the depositor share is subject, a sufficient discharge to the credit union for the payment of any money payable in respect of the deposit or share, and the credit union is not bound to see to the application of any money paid on the receipt or order.

(3) Notwithstanding any neglect or omission on the part of a credit union to enter a proper description in its books, an executor, an administrator, a guardian, a committee or a trustee who is entered on the books of the credit union as a member, or who is described as representing a named estate, trust or trust beneficiary in such capacity shall not be personally liable to the credit union with respect to the share that he or she represents.

(4) The estate or trust beneficiary represented by a person described in subsection (3) continues to be liable to the credit union in the same manner and to the same extent as if the testator, minor, ward, person of unsound mind, beneficial trust or their trust beneficiary were entered on the records of the credit union as the holder of the shares.

Division II Consumers Co-operative societies and Housing Co-operative Societies

209. Restrictions on directorship.

(1) Subject to subsection (2), an employee of a consumers' society, or housing society or service society shall not be a director of the society.

(2) A society, referred to in subsection (1), shall provide in its bye-laws that none of its elected directors shall be employees.

210. Relationship with members.

The relationship between a housing co-operative society and its members is not a relationship between a landlord and his or her tenants.

211. Bye-laws.

The bye-laws of a housing co-operative society shall include, in addition to the matters required by section 13

(a) the manner in which each member may be required to provide capital for the purposes of the co-operative society;

(b) the manner in which a member may be required to pay for housing charges or other reserves;

(c) the basis for fixing the amount of housing charges;

(d) subject to section 30, the manner of withdrawal by a member and the repayment of a member's interests in the co-operative society; and

(e) the rules governing any leases of housing units by members to nonmembers.

212. Amendment of bye-laws.

Where the bye-laws of a co-operative society provide that it is a housing cooperative society or that this Part applies to the co-operative society, the co-operative society may not repeal or amend that provision of the bye-laws without the consent of the Registrar.

213. No dividend on share capital.

Where a housing co-operative society has a share capital the co-operative society shall not pay any dividend on the share capital to its members.

214. Right to possession terminated.

(1) Where a person's membership in a housing co-operative society is terminated, any right of that person to possess or to occupy residential premises acquired by virtue of membership in the co-operative society is terminated.

(2) Where a person's membership in a housing co-operative society is terminated and the member does not give up possession of the housing unit he or she occupies, the housing co-operative society may apply to the Court to recover possession or to recover any arrears of housing charges.

215. Abandoned goods.

(1) Where a member of a housing co-operative society

(a) has his or her membership terminated or has vacated or abandoned the housing unit formerly occupied by him or her; and

(b) has left property in the housing unit, the co-operative society may apply to the Magistrates' Court for an order authorising it to remove the property from the housing unit and sell or otherwise dispose of it.

(2) The Magistrate may make an order under subsection (1) where the Magistrate is satisfied that the housing co-operative society has made a reasonable effort to locate the former member.

(3) Where a housing co-operative society sells or otherwise disposes of property under an order made under subsection (2), it shall pay into the Magistrates' Court, to the credit of the former member, any remaining proceeds of the disposition after deducting

(a) any amount with respect to costs incurred by it relating to the disposition that it would be authorised to retain if the property were goods sold under distress for housing charges; and

(b) any arrears of housing charges and damages that the Magistrate allows.

(4) Where a former member does not claim the remaining proceeds described in subsection (3) within three months after the date the money was paid into the Magistrates' Court, the money shall be paid into the Consolidated Fund.

(5) Where a housing co-operative society removes, sells or otherwise disposes of property under an order made under subsection (2), the housing co-operative society is not liable in any action taken by the former member with respect to the removal, sale or disposition.

Division III Industrial Co-operative Societies

216. Membership.

(1) In an industrial co-operative society, seventy-five per cent of all employees shall be members of the co-operative society.

(2) An industrial co-operative society shall not subcontract out more than fifty per cent of its work without the consent of the Registrar.

217. Bye-laws.

In addition to the matters required to be set out in the bye-laws under section

13, the bye-laws of an industrial co-operative society shall include

- (a) conditions of admission, expulsion or suspension of its members;
- (b) a procedure for laying off members when there is a lack of work and a procedure of recall to work;
- (c) remuneration of workers involved in the day to day work of the co-operative society; and
- (d) allocation of bonus among members.

218. Restriction on registration.

An industrial co-operative society shall not be registered where the acquisition of goods for sale to the public is one of its principal objects stated in its bye-laws.

219. Bonus based on labour.

When allocating among creditors or paying a bonus to the members, the directors of an industrial co-operative society may take into account the labour contribution of each member.

220. Employees may be directors.

Directors of an industrial society shall not be employees of the society.

PART XV

APEX BODY

221. Establishment and constitution of apex body.

Co-operative societies may establish an apex body which shall be composed of such member representatives of the of co-operative societies which may exist in Saint Christopher and Nevis.

222. Functions.

The apex body shall be a co-operative society under this Act and shall coordinate, assist and promote activities for the development, growth and expansion of all co-operative societies and shall perform representational and other functions as may be determined by its constituent members, including

- (a) assisting with the formation and readiness for registration of viable co-operative societies;
- (b) the initiation and encouragement of capacity development activities beneficial to co-operative societies;
- (c) liaison and coordination with all co-operative societies;
- (d) stimulation of community awareness and public confidence; and
- (e) representation of the interests of the co-operative sector.

223. Officers.

(1) The officers of the apex body shall be elected at the first meeting of that body and shall hold office for a period of one year and thereafter the election of such officers shall be in accordance with the bye-laws of the apex body.

(2) The apex body shall regulate its own procedure and may establish its own central credit union or central co-operative society in conjunction with other apex bodies and co-operative societies to provide specialised services and facilities to members.

224. Consultation by Registrar.

The Registrar shall, from time to time, consult the apex body or a central credit union or central co-operative society with respect to matters relating to the development of co-operative societies.

**PART XVI
OFFENCES****225. Corrupt practices and bribery.**

(1) A member, agent or employee of a co-operative society shall not accept, agree to accept, obtains or attempt to obtain whether for himself or another, any gift or consideration as an inducement reward for

(a) doing or forbearing to do any act relating to the business of the cooperative society; or
(b) for showing favour or disfavour to any person in relation to the business of the co-operative society.

(2) A person shall not give, agree to give, or offer such gift or consideration to any member, agent or employee of a co-operative society as inducement or reward for any purpose mentioned in subsection (1).

(3) A person who contravenes subsection (1) or (2) commits an offence and is liable

(a) on summary conviction to a fine not exceeding ten thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both; or

(b) on conviction on indictment to a fine not exceeding fifty thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding three years, or to both.

(4) In this section "consideration" includes valuable consideration of any kind.

226. Falsely obtaining property of co-operative society.

(1) A person shall not

(a) obtain possession of any property or the grant of a loan from a cooperative society by false representation or other corrupt means;

(b) wrongfully withhold or misapply any property belonging to or loan from a co-operative society; or

(c) wilfully apply any part of property belonging to or loan from a cooperative society for purposes other than those directed or expresse in the bye-laws of the co-operative society or authorised in this Act or the Regulations.

(2) A person who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable

(a) on summary conviction to a fine not exceeding five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both; or

(b) on conviction on indictment to a fine not exceeding twenty thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both.

(3) In any proceedings under this section the person accused may, in addition to any penalty imposed, be ordered

(a) to deliver up any property or repay any sum of money to which the proceedings relate; and

(b) pay the cost of the proceedings.

227. Failure to comply with Act.

(1) A person shall not

(a) fail without reasonable cause or wilfully neglect or refuse to comply with a requirement of this Act or the Regulations or to provide any information in circumstances for which a penalty is not provided elsewhere in this Act; or

(b) purporting to comply with a requirement for information under this Act, provide information which the person knows to be false.

(2) A person shall not wilfully or without reasonable cause disobey any summons, order or direction lawfully issued under this Act or the Regulations.

(3) A person shall not knowingly alter, destroy, mutilate, conceal, cover or falsify or make a false entry in any record or document of or belonging to a co-operative society with intent to impede, disrupt or influence an investigation or the proper administration of any matter.

(4) An officer or member of a co-operative society shall not wilfully contravene the bye-laws of the co-operative society in relation to his or her duties or functions as such officer or member.

(5) A person who contravenes subsection (1), (2), (3) or (4) commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding twenty thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both.

228. Dealing in property subject to charge.

(1) A person shall not

(a) fraudulently remove any property comprised in a charge created in favour of a co-operative society from the place where such property was situated at the time of the execution of the charge; or

(b) knowingly dispose of, or deal with or attempt to dispose of or deal with such property without first obtaining in writing leave of the cooperative society.

(2) A person who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both.

(3) The Court may in addition to any penalty imposed on a person under subsection (1), require that person to repay such amount of the loan with interest as has not been repaid at the date of the conviction and the payment of that amount shall discharge the liability of the borrower to repay the loan.

229. Offences with respect to reports.

(1) A person shall not make or assist in making a report, return, notice or other document, required by this Act or the Regulations to be sent to the Registrar to any other person, that

(a) contains an untrue statement of a material fact; or

(b) omits to state a material fact required in the report or necessary to make a statement contained in the report not misleading in the light of the circumstances in which it was made.

(2) A person who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable on summary conviction in the case of an individual, to a fine not exceeding five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both; or in the case of a person other than an individual, to a fine not exceeding ten thousand dollars.

(3) A person does not commit an offence under subsection (2) where the untrue statement or omission was unknown to him or her, and in the exercise of reasonable diligence, could not have been known to him or her.

(4) A director, officer, employee or agent of a co-operative society shall not

(a) obstruct any person who is carrying out an examination under section 186; or

(b) obstruct the examination of a co-operative society undertaken under section 186.

(5) A person who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding five thousand dollars or imprisonment for a term not exceeding six months or to both, or on conviction on indictment to a fine not exceeding twenty thousand dollars or imprisonment for a term not exceeding two years or to both.

230. Contravention of Act or Regulations.

(1) A person shall not

(a) fail to give any notice or fail to send any return or document that is required for the purpose of this Act; or

(b) fail to hold an annual or special general meeting within the stipulated or extended time in conformity with sections 42, 43 and 44 of the Act.

(2) A person who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable on summary conviction

(a) in the case of a first offence to a fine not exceeding five thousand dollars;

(b) in the case of a subsequent offence to a fine not exceeding ten thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months.

(3) Where a body corporate commits an offence under this Act or the Regulations and the offence is proved to have been committed with the consent or connivance of, or to be attributable to any neglect on the part of

(a) any director, manager, secretary or other similar officer of the body corporate; or

(b) any person who was purporting to act in such capacity, he or she, as well as the body corporate, shall commit the offence and be liable to be proceeded against and punished accordingly.

(4) For the purposes of subsection (2), "director", in relation to a body corporate whose affairs are managed by its members, means a member of the body corporate.

(5) The Regulations may create an offence punishable on summary conviction by a fine not exceeding twenty thousand dollars or imprisonment for a term not exceeding two years or by both.

231. Use of words "credit union" or "co-operative".

(1) A person shall not in doing business in Saint Christopher and Nevis

(a) use the words "credit union" or "co-operative" or any abbreviation or derivation thereof as part of the name of the business or with respect to goods, wares, merchandise or services or the person's method of conducting business; or

(b) hold himself or herself or his or her business to be a registered cooperative society; unless the person or his or her business is registered under this Act.

(2) A person who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding five thousands dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both.

232. Court order to comply.

Where a person is convicted of an offence under this Act or the Regulations, the court may, in addition to any punishment imposed, order the person to comply with the provision of this Act or the Regulations for the contravention of which he or she has been convicted.

233. Limitation.

The effluxion of time is no bar to prosecution for an offence under this Act.

234. Preservation of civil remedy.

A civil remedy for an act or omission under this Act is not suspended or affected by reason that the act or omission is an offence under this Act.

**PART XVII
MISCELLANEOUS**

235. Interpretation of Part XVII.

In this Part “duplicate originals” means the two copies of the bye-laws or statements required in section 236;

“statement” means a special resolution stating an intent to dissolve mentioned in section 164.

236. Execution and filing.

(1) Where this Act requires that bye-laws or a statement relating to a cooperative society shall be sent to the Registrar, unless otherwise specifically provided, the co-operative society shall send three copies of the bye-laws or statement signed by a director or an officer of the co-operative society.

(2) Subject to the other provisions of this Act, where the Registrar receives duplicate originals of any bye-laws or statement under subsection (1) and they are accompanied by any other required documents and the prescribed fees, the Registrar shall

(a) endorse on each of the duplicate originals the word “Registered” and the date of the registration;

(b) issue in duplicate the appropriate certificate and attach to each certificate one of the duplicate originals of the bye-laws or statements;

(c) file a copy of the certificate and attached bye-laws or statement;

(d) send to the co-operative society the original certificate and attached bye-laws or statement; and

(e) publish in the Gazette notice of the issue of the certificate.

(3) The Registrar may date a certificate mentioned in subsection (2) as of the day it receives the bye-laws or statement issued under which the certificate is issued or as of any later day specified by the person who signed the bye-laws or statement.

(4) A signature required on a certificate mentioned in subsection (2) may be printed or otherwise mechanically produced.

237. Waiver of notice.

Where a notice or document is required by this Act or the Regulations to be sent, the sending of the notice or document may be waived or the time for sending the notice or document may be waived or abridged at any time with the consent in writing of the person entitled to receive the notice or document.

238. Certificate of co-operative society.

(1) A director or officer of a co-operative society may

(a) sign a certificate stating any fact set out in; or

(b) certify a copy of the whole or any part of, the bye-laws, or any other contract to which the co-operative society is party or the minutes of a meeting of the directors, a committee of directors or the members.

(2) A certificate or certified copy described in subsection (1) is admissible in evidence as prima facie proof of the facts contained in the certificate or certified copy without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the certificate or the certification.

239. Documents.

(1) Where a notice or document is required to be sent to the Registrar under this Act, the Registrar may accept a photo-static or photographic copy of the notice or document.

(2) A person is not affected by, or presumed to have notice or knowledge of, the contents of a document concerning a co-operative society by reason only that the document has

been filed with the Registrar or is available for inspection at any office of the co-operative society.

240. Alteration.

Where the Registrar is authorised to do so by the person who sent a notice or document or his or her representative, the Registrar may alter the notice or document, but it may not alter an affidavit or statutory declaration.

241. Rectification and correction.

(1) Where there is an error in the bye-laws, a notice, a certificate or any other document, the directors or members shall on the request of the Registrar

- (a) pass any necessary resolutions;
- (b) send to the Registrar the relevant documents required to comply with this Act; and
- (c) take any other steps that the Registrar may reasonably require, in order that the Registrar may correct the bye-laws, notice, certificate or document.

(2) Before making a correction under subsection (1), the Registrar shall be satisfied that the correction would not prejudice any of the members or creditors of the cooperative society.

(3) The Registrar may, at the request of a co-operative society or of any other interested person, accept a corrected version of any of the documents referred to in subsection (1) if

- (a) the correction is approved by the directors of the co-operative society; and
- (b) the Registrar is satisfied that the correction would not prejudice any of the members or creditors of the co-operative society.

(4) If in the view of

- (a) the Registrar;
- (b) the co-operative society; or
- (c) any interested person, a correction to any of the documents referred to in subsection (1) above would prejudice a member or a creditor of the co-operative society, the Registrar, the co-operative society or the person may apply to the Court for an order that the document be corrected and for an order determining the rights of the members or creditors.

(5) An applicant under subsection (4) shall give the Registrar notice of the application, and the Registrar shall be entitled to appear and to be heard and represented by a member of the staff of the Registrar or by an attorney-at-law.

(6) A corrected document shall bear the date of document it replaces.

(7) If a corrected certificate materially amends the terms of the original certificate, the Registrar shall without delay give notice of the correction in the Gazette and in a newspaper published and circulated in Saint Christopher and Nevis.

(8) The Registrar may on its own initiative correct any

- (a) linguistic error;
- (b) error of transcription;
- (c) clerical error; or
- (d) mistake where the error is made by the Registrar or where the error is not substantive in nature.

242. Exemption from stamp duty and other taxes.

(1) A co-operative society registered under this Act is exempt from any stamp duty and taxes with which, under any law for the time being in force, instruments executed by or on behalf of such co-operative society or by an officer or member and relating to the business of such co-operative society, or any class of such instruments, are respectively chargeable.

(2) Notwithstanding the provisions of any other law in force in Saint Christopher and Nevis, a co-operative society shall be exempt from the payment of income tax, corporation tax and any other tax on the incomes of such co-operative society.

(3) Notwithstanding the provisions of any other law in force in Saint Christopher and Nevis providing for the payment of customs duties, excise taxes, environmental levy or customs service charge, the Minister in Cabinet may by Order published in the Gazette, exempt a society registered pursuant to this Act from liability to customs duties, excise taxes, environmental levy or customs service charge on goods imported by the society.

243. Amendment of Schedules.

(1) The Minister may, by Order, amend Schedule 1 and such Order shall be subject to negative resolution of the National Assembly.

(2) The Minister may, by Order, amend Schedule 2 and Schedule 3.

244. Proof of entry in books and other documents.

(1) A copy of any entry in a book or other document that is required to be kept by this Act shall, if certified by the Registrar be received in any legal proceedings, civil or criminal, as prima facie evidence of the existence of such entry and shall be admitted as evidence of the matters, transactions and accounts therein recorded in every case where, and to the same extent as, the original entry itself is admissible.

(2) An officer of a co-operative society shall not, in any legal proceedings to which the co-operative society is not a party, be compelled to produce any of the co-operative society's books, the content of which can be proved under subsection (1), or to appeal as a witness to prove any matters, transactions or accounts therein recorded, unless the Court for special reasons so directs.

245. Immunity of Registrar and staff.

The Registrar or any other person exercising a function under this Act, shall not be liable in damages for anything done or omitted in the discharge or purported discharge of their respective functions under this Act or under the Regulations unless it is shown that the act or omission was in bad faith.

246. Abandoned property.

(1) Subject to subsection (2), where there has been no activity relating to the property specified in paragraphs (a) and (b) for a period of 15 years except for the posting of interest and dividends the property specified in paragraphs (a) and (b) which are held or owing by a co-operative society shall be presumed to be abandoned

(a) any general deposit, demand, savings or matured time deposit made in Saint Christopher and Nevis with a credit union, together with any interest or dividend, but excluding any lawful charges thereon;

(b) any funds paid in Saint Christopher and Nevis toward the purchase of shares or other interests in a credit union, together with any interest or dividend, but excluding any lawful charges thereon where there has been no activity for one year.

(2) The property specified in paragraphs (a) or (b) of subsection (1) shall not be presumed abandoned unless correspondence by the credit union has been issued to the owner's last known address at least once every three years reminding the owner that if no activity is evidenced for a period of 15 years the property is deemed to be abandoned.

(3) The property specified in paragraphs (a) or (b) of subsection (1) shall not be presumed abandoned if the owner has, within 15 years of the establishment of the account

(a) increased or decreased the amount of the deposit or funds;

- (b) presented the passbook for the crediting of interest or dividends;
 - (c) corresponded in writing with the credit union concerning the property; or
 - (d) otherwise indicated an interest in the property.
- (4) Where any contents of a safety deposit box on which the lease or rental has expired and concerning which notice of the intention of the credit union to deliver the contents thereof into the custody of the Minister responsible for Finance has been sent by Registered letter to the last known address of the lessee and to which the lessee has failed to respond within one year the contents shall be deemed to be abandoned.

247. Regulations.

- (1) For the purpose of carrying out this Act, the Minister may make Regulations
- (a) defining, enlarging or restricting the meaning of any word used but not defined in this Act;
 - (b) requiring the payment of and prescribing the amount of any fee with respect to
 - (i) the filing, examination or copying of any document; or
 - (ii) any action that the Registrar is required or authorised to take under this Act;
 - (c) prescribing the procedure for appeals to the Registrar;
 - (d) prescribing business in which co-operative societies or any class of co-operative societies may not engage without the prior approval of the Registrar;
 - (e) exempting any co-operative society or class of co-operative societies from any provision of this Act;
 - (f) prescribing any other matter or thing required or authorised to be prescribed by this Act; and
 - (g) generally for giving effect to and for the efficient operation of the Act.
- (2) Regulations under this Act may
- (a) make different provision in relation to different cases or circumstances;
 - (b) apply in respect of particular persons or particular cases or particular classes of persons or particular classes of cases, and define a class by reference to any circumstances whatsoever; and
 - (c) contain such transitional, consequential, incidental or supplementary provisions as appear to the Minister to be necessary or expedient for the purposes of the regulations.

PART XVIII TRANSITIONAL

248. Interpretation.

In this Part “the former Act” means the Co-operative Societies Act, Cap. 21.04.

249. Existing directors and officers.

- (1) The directors and officers of co-operative societies in existence on the coming into force of this Act shall continue to hold office in accordance with the former Act and the bye-laws of the co-operative society.
- (2) Where new directors of a co-operative society are to be elected after the coming into force of this Act, such directors shall be elected in accordance with this Act.

250. Co-operative societies, etc., registered under the former Act.

All co-operative societies which prior to the coming into force of this Act were duly registered or deemed to be registered under the former Act shall be taken to be registered under this Act, and-

- (a) the bye-laws of a co-operative society, including any amendments of those bye-laws, as registered under the former Act, shall be taken as if registered under this Act;
- (b) a register kept in accordance with the requirements of the former Act shall be taken to be part of the corresponding register to be kept under this Act;
- (c) a document referring to a provision of the former Act shall be construed as referring to the corresponding provision of this Act; and
- (d) all orders, directions, appointments and other acts lawfully made or done under a provision of the former Act and in force immediately before the coming into force of this Act shall be taken to have been made or done under the corresponding provisions of this Act and shall continue to have effect accordingly.

251. Repeal.

- (1) Subject to subsection (2), the Co-operative Societies Act, Cap. 21.04 is repealed.
- (2) All rules, regulations and bye-laws made under the former Act shall continue in force with any necessary amendments and shall be taken as having been made under this Act until such time as new rules and regulations and bye-laws are made.
- (3) Notwithstanding subsection (1), where a co-operative society is being dissolved or liquidated under the former Act, that Act shall continue to apply to that cooperative society and its dissolution or liquidation.

252. Provisions of Act No. 22 of 2009 to prevail.

If a conflict exists between a provision of this Act and a provision of the Financial Services Regulatory Commission Act, No. 22 of 2009, the provision of the Financial Services Regulatory Commission Act shall prevail.

SCHEDULE 1

(Section 195)

CONSTITUTION AND PROCEDURE OF THE CO-OPERATIVE SOCIETIES APPEALS TRIBUNAL

PART 1

Constitution

1. Membership

The Co-operative Societies Appeals Tribunal shall consist of three persons, one of whom shall be an attorney-at-law of at least five years standing who shall be the Chairperson of the Tribunal.

2. Appointment

The members of the Tribunal shall be appointed by the Minister, after consultation with the apex body, for a period of not more than three years and shall be eligible for re-appointment.

3. Resignation

A member may at any time resign his membership by notice in writing to the Minister.

4. Inability

- (1) If the Minister is satisfied that a member
 - (a) has been incapacitated by physical or mental illness; or

(b) is otherwise unable or unfit to discharge the functions of a member; the Minister may by notice published in the Gazette, declare the office of the member to be vacant and thereupon, the office shall become vacant.

(2) In case of the temporary absence or inability of a member to act, the Minister may appoint a suitable person to act in that member's place.

5. Publication

The Minister shall publish, in the Gazette, notice of the appointment and cessation of appointment of a member.

6. Remuneration

The members of the Tribunal shall receive such remuneration as the Minister may prescribe.

7. Validity of proceedings

The validity of any proceedings of the Tribunal shall not be affected by any vacancy among the members or any defect in the appointment of a member.

8. Rules

Subject to this Schedule, the Tribunal shall regulate its own procedure and may make rules for that purpose.

PART 2

Procedure

1. Initial Procedure

(1) An appeal to the Tribunal shall be by notice in writing, and sent or delivered to the chairperson of the Tribunal.

(2) On receipt of a notice of appeal, the chairperson shall send a copy thereof to the other members of the Tribunal.

(3) The chairperson of the Tribunal may appoint a secretary and such other officers as he thinks fit for the purposes of the appeal.

2. Statements to be provided

(1) The appellant shall, within 14 days of the lodging of the notice of appeal, provide to the chairperson of the Tribunal a written statement setting out the facts and grounds on which the appeal is based and a copy of such statement shall be forwarded by the chairperson of the Tribunal to the Registrar and, if the appeal is against a decision of an arbitrator, to the arbitrator, and, if the appellant is not a co-operative society, to the co-operative society of which the appellant is a member, and if the appeal is against the decision of the Registrar or an arbitrator in a dispute, to any other party to the dispute.

(2) A person or co-operative society to whom a copy of the appellant's statement has been provided shall, within 14 days of the receipt by him of the statement, submit to the chairperson of the Tribunal a written response to the statement, and a copy of such response shall be sent by the chairperson of the Tribunal to the appellant and to any other person interested in the appeal of whom he or she has notice.

(3) The chairperson shall send copies of all statements and responses to the other members of the Tribunal as soon as he or she receives them.

3. Further particulars

On application by any person interested in the appeal to whom a copy of the written statement of the appellant or of the response has been sent, or in any case where the chairperson of the Tribunal considers it necessary to do so for the proper resolution of the appeal, the chairperson may require the appellant or any other person to provide him or her with further particulars in writing within such time as the chairperson may direct and the chairperson, on receipt of such particulars shall provide copies of such particulars to the other interested parties and to the other members of the Tribunal.

4. Notice of hearing

The chairperson of the Tribunal shall, in consultation with the other members of the Tribunal, fix a date and place for the hearing of the appeal and shall give not less than 7 days' notice thereof to the appellant, the Registrar and any other interested party.

5. Procedure at hearing

(1) At a hearing before the Tribunal, the appellant, the Registrar and any other interested party shall be entitled to appear and to be heard and represented by an attorney-at-law or, in the case of the Registrar, by a member of the Registrar's staff.

(2) The Tribunal may admit any duly authenticated written statement or other material as prima facie evidence of any fact or facts in any case in which it thinks it just and proper so to do.

(3) The Tribunal may, if it thinks fit, call for such documents and examine such witnesses as appear to it likely to afford evidence relevant and material to the enquiry.

(4) The Tribunal may require any party to the enquiry or any witness in the proceedings to give evidence on oath and, for that purpose, the chairperson of the Tribunal shall have power to administer an oath.

(5) If, after notice of a hearing has been duly given, the appellant, the Registrar or any other interested party fails to appear at the hearing, the Tribunal may proceed with its enquiry into the appeal notwithstanding the absence of all or any of them, or may give such directions with a view to the determination of the appeal as the Tribunal thinks just and proper.

(6) Proceedings of the Tribunal shall be held in public.

6. Decision of Tribunal

(1) The decision on any matter of the majority of the Tribunal shall be the decision of the Tribunal, and the decision of the Tribunal shall be recorded in writing and signed by the chairperson of the Tribunal, who may correct in any decision any clerical mistake or error.

(2) A copy of the decision, signed as aforesaid, shall be sent by the chairperson of the Tribunal, as soon as may be practicable, to the appellant, the Registrar and any other interested party.

(3) The Tribunal may, on the application of any person, award costs to any party to an appeal in such amount as the Tribunal shall assess at the hearing.

7. General provision as to procedure

Save as otherwise expressly provided by this Act, the procedure at any hearing before the Tribunal shall be such as the Tribunal may determine.

8. Proof of decisions of the Tribunal

The production in any proceedings in any court of a document purporting to be certified by the secretary as a copy of a decision of the Tribunal shall, unless the contrary is proved, be sufficient evidence of the document and the facts stated therein.

SCHEDULE 2

(Section 12)

Application Form for Registration of a Credit Union

CREDIT UNION APPLICATION FOR CERTIFICATE OF REGISTRATION

PART A

A. Proposed Credit Union

Name

Street

City State

Contact Person:

Name

Street

123

Co-operatives Societies Act, 2011 – 31.

City State

Telephone Number Fax Number E-Mail Address

1 Define the proposed field of membership:

2 The board will have _____ members.

3 The credit committee will have _____ members.

4 The supervisory committee will have _____ members.

B. Economic Advisability of Organizing Proposed Credit Union

GENERAL INFORMATION

1. Potential membership:

2. Potential Interest

- Number of people surveyed:

- Number of people responding to survey:

- Number of people pledging an initial deposit:

- Total amount pledged: \$

- Number pledging systematic savings:

- Total amount pledged (per month): \$

3. Number of persons attending the charter-organization meeting.

4. Attach a business plan containing, at a minimum, the following elements:

- Mission.

- Analysis of market conditions, including if applicable, geographic, demographic, employment, income, housing, and other economic data.

- Evidence of member support.

- Goals for shares, loans, and for number of members.

- Membership use - financial services needed/desired.

- Financial services to be provided to members of all segments within the field of membership.

- How/when services are to be implemented.

- Organizational/management plan addressing qualification and planned training of officials/employees
- Continuity plan for directors, committee members, and management staff
- Operating facilities, to include office space/equipment and supplies, safeguarding of assets, insurance coverage, etc.
- Type of record keeping and data processing system
- Detailed semiannual pro forma financial statements (balance sheet, income and expense projections) for 1st and 2nd year, including assumptions – e.g., loan and dividend rates
- Plans for operating independently
- Written policies (shares, lending, investments, funds management, capital accumulation, dividends, collections, etc.)
- Capital base - source of funds to pay expenses during initial months of operation, including any subsidies, assistance, etc., and terms or conditions of such resources
- Evidence of sponsor commitment (or other source of support) if subsidies are critical to success of the credit union. Evidence may be in the form of letters, contracts, financial statements from the sponsor, and any other such document on which the proposed credit union can substantiate its projections.

C. Specific Information – Types of Membership Common Bond of:

- Philosophy
- Occupation
- Association
- Residence in a defined neighborhood or district

Specific Information – Philosophical Common Bond Applicants

1. Explain how the credit union will be able to transact business effectively with the members.

Specific Information – Occupational Sponsor Applicants

1. How long has the sponsor company been in existence?
2. What was the highest number of employees during the past three years?
- Lowest number during the past three years? If a large variance, explain.
3. Are there any contemplated changes in the corporate structure of the company?

If yes, explain.

4. Have there been any significant changes in the corporate structure in the past three years? If yes, explain.

5. Are there any negotiations now in progress between management and labor that could lead to work stoppages? If yes, explain.

6. If the credit union cannot operate on the employer's property, explain how the credit union will be able to transact business effectively with the members.

7. If the employees to be served by the credit union work in more than one location or city, identify each location with the corresponding number of employees working at each.

8. Are there other employees of the company who are not being included in the proposed field of membership?

9. If so, give the number and location of the other employees and explain why they are not included in the proposed credit union's field of membership.

Specific Information – Associational Sponsor Applicants

1. State the purpose and goals of the organization sponsoring this charter.
2. List the types of activities and their frequency, which the organization sponsors that provide contact among the members and from which common loyalties, mutual benefits, and mutual interests are developed.
3. In what year was the organization established? Is it incorporated? Where is the headquarters located?
4. Give statistics as to trends in membership during the last five years.

5. What is the frequency of membership meetings? Average attendance and Dues required (\$).

6. State the geographic territory where members reside.

7. Submit a copy of the current bye-laws of the association, the constitution, articles of incorporation, or equivalent documentation and recent financial statements, i.e. balance sheet, and income and expense statement, with this application.

8. If the by-laws, constitution, articles of incorporation, or equivalent documentation provide for more than one type of membership and if all classes of membership are to be included in the credit union's field of membership, provide justification for the inclusion of other than "regular" members.

Specific Information – Residential Applicants

1. Explain the nature of the community, neighborhood, or rural district where members live.

2. Define the borders of the community, neighborhood, or rural district in which residents are eligible for membership.

D. Provisional Directors

List of subscribers/organizers signing the application

(must be at least ten members who satisfy the requirements for membership)

Name

Street

City State

Years of Residence: Occupation:

CERTIFICATION

We, the organizers, certify that the information contained in this application has been examined carefully and is true, correct, and complete, and is current as of the date of this submission. We also certify that any misrepresentations or omissions of material facts with respect to this application, any attachments to it, and any other documents or information provided in connection with the application for the organization of the proposed credit union may be grounds for denial or cancellation of registration, or grounds for an objection to the undersigned as proposed director(s), committee member(s) or officer(s) of the proposed credit union.

We acknowledge that approval of this application is in the discretion of the Director of Supervision.

Signature Date Typed Name

SCHEDULE 3

(Section 12)

Application and Registration Fees for a Credit Union

Total Assets Application Fee Annual Registration Fee

(Non-refundable)

Less than \$20 000 000 \$3,500.00 \$5,000.00

Between \$20 000 000-\$40 000 000 \$3,500.00 \$7,500.00

Greater than \$40 000 000 \$3,500.00 \$10,000.00

CURTIS A. MARTIN

Speaker

Passed by the National Assembly this 4th day of October 2011.

JOSÉ LLOYD

Clerk of the National Assembly

4.32. SANTA LUCIA

Ley de Sociedades Cooperativas N° 28/99

<http://faolex.fao.org/docs/pdf/stl33177a.pdf>

<http://faolex.fao.org/docs/pdf/stl33177b.pdf>

4.33. SURINAN

WET van 8 juli 1944, tot regeling van de coöperatieve verenigingen (G.B. 1944 no. 93), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1968 no. 82, S.B. 1981 no. 23, S.B. 1983 no. 1, S.B. 1983 no. 93, S.B. 2004 no. 26.

Artikel 1

1. De coöperatieve vereniging is de vereniging van personen, waarbij de in- en uittreding van leden is toegelaten en die de bevordering van de stoffelijke belangen van haar leden ten doel heeft hetzij door middel van gemeenschappelijke uitoefening van hun nering of ambacht hetzij door aanschaffing van hun benodigdheden hetzij door het hun verstrekken van voorschotten of crediet.
2. Een coöperatieve vereniging, welke aan deze vereisten voldoet, verliest haar karakter niet, indien de statuten haar veroorloven haar werkkring tot derden uit te strekken, noch indien zij naast stoffelijke ook andere belangen behartigt.

Artikel 2

1. De naam van een coöperatieve vereniging bevat de aanwijzing van haar doel, het woord "coöperatief" en een aanduiding omtrent de wijze, waarop de aansprakelijkheid der leden voor de verbintenissen van de coöperatieve vereniging is geregeld.
2. De coöperatieve vereniging wordt aangeduid met de letters W. A., indien haar statuten geen van het voorschrift van het eerste tot en met het vierde lid van artikel 18 afwijkende regeling der aansprakelijkheid bevatten; met de letters G. A. indien de statuten een afwijkende regeling bevatten; en met de letters U. A., indien de aansprakelijkheid bij de statuten is uitgesloten.
3. Uit alle geschriften, gedrukte stukken en aankondigingen, waarin de coöperatieve vereniging partij is of welke van haar uitgaan, met uitzondering van telegrammen en reclames, moeten de volledige naam der coöperatieve vereniging volgens de akte van oprichting, de plaats, waar haar zaak volgens het handelsregister gevestigd is, en de aanduiding, in het tweede lid van dit artikel bedoeld, duidelijk blijken.

Artikel 3

1. De akte van oprichting der coöperatieve vereniging, welke haar statuten moet bevatten, en de akte, waarbij de statuten worden gewijzigd, worden op straffe van nietigheid notarieel in de Nederlandse taal verleden, behoudens het bepaalde in lid 3.
2. Bij die akte verschijnen de partijen in persoon of worden krachtens schriftelijke volmacht vertegenwoordigd.
3. Een notariële akte voor de oprichting of voor de wijziging der statuten van de coöperatieve vereniging is niet vereist, wanneer de Staat de oprichter of mede-oprichter is.

Artikel 4

1 Gew. bij S.B. 1983 no. 1.

2 Gew. bij G.B. 1968 no. 82, S.B.1983 no. 93, S.B. 2004 no. 26.

1. De statuten der coöperatieve vereniging bevatten op straffe van nietigheid:

- a. haar naam en die van het district, waarin zij gevestigd is, met aanduiding van de plaats;
- b. de aanduiding van het bedrijf, dat door haar zal worden uitgeoefend;
- c. de regeling van de aansprakelijkheid der leden voor de verbintenissen der coöperatieve vereniging of de uitsluiting daarvan, dan wel de vermelding, dat de in artikel 18 opgenomen regeling geldt;
- d. voorschriften omtrent hun wijziging, waaruit in het bijzonder blijkt of en in hoeverre wijziging geoorloofd is, alsmede of en onder welke voorwaarden leden door opzegging van het lidmaatschap de toepasselijkheid te hun aanzien kunnen ontgaan van wijzigingen, die ten gevolge hebben, dat de aansprakelijkheid der leden voor de verbintenissen der coöperatieve vereniging wordt verhoogd of de verplichtingen der leden tegenover de coöperatieve vereniging worden verzwwaard.

2. Onder wijziging der statuten is begrepen wijziging van de duur der coöperatieve vereniging.

3. De plaats van vestiging moet in Suriname gelegen zijn.

Artikel 5

1. Indien de duur der coöperatieve vereniging niet in de akte van oprichting is aangegeven, wordt zij geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan.

2. Indien de statuten niet anders bepalen, valt het boekjaar der coöperatieve vereniging samen met het kalenderjaar.

Artikel 6

1. De coöperatieve vereniging kan niet aanvangen alvorens de President de Raad voor het Coöperatiewezen gehoord, heeft verklaard, dat hem van bezwaren niet is gebleken.

2. De wijziging van de statuten der coöperatieve vereniging bestaat rechtens niet, vóórdát de President de Raad voor het Coöperatiewezen gehoord, verklaard heeft, dat hem van bezwaren niet is gebleken.

3. De bij het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde verklaringen mogen alleen worden geweigerd op de overwegingen, dat de vereniging niet op coöperatieve basis is geschoeid, dat de coöperatieve vereniging of de wijziging van haar statuten of de wijze, waarop de wijziging van haar statuten tot stand is gekomen, strijdt met de goede zeden of met de openbare orde of indien de akte of de wijziging der statuten niet voldoet aan hetgeen bij wet is voorgeschreven.

4. Ter verkrijging van die verklaringen moet de akte van oprichting of de akte, houdende wijziging der statuten of een ontwerp van een dezer akten aan de President worden ingezonden, waarbij gevoegd is een bewijs van storting in Staatskas van een bedrag van SRD.150,- (eenhonderdenvijftig Surinaamse dollar) voor administratie-kosten ingeval het een nieuw op te richten coöperatieve vereniging betreft en voor

2

3 Vervallen bij S.B. 1981 no. 23.

elke latere wijziging van de statuten een bedrag van SRD.75,- (vijfenzeventig Surinaamse dollar).

5. Het bepaalde ten aanzien van de administratiekosten in het vorige lid is niet van toepassing op een coöperatieve vereniging waarbij de Staat oprichter of mede-oprichter is.

6. Bij weigering van die verklaringen wordt de reden daarvan aan de inzender medegedeeld.

Artikel 7

1. De bestuurders van de coöperatieve vereniging zijn verplicht de akte van oprichting, de akte, waarbij haar statuten worden gewijzigd, en de in het eerste lid en tweede lid van artikel 6 bedoelde verklaringen openbaar te maken door middel van het Gouvernements-Advertentie-Blad.

2. Te dien einde wordt een volledig afschrift der akte van oprichting of van wijziging, door de notaris, te wiens overstaan de akte is verleden, voor afschrift getekend, met een afschrift der verklaring bij het Gouvernements-Advertentie-Blad ingezonden.

3. De bestuurders der coöperatieve vereniging zijn voor handelingen ten name der coöperatieve vereniging door hen of op hun last verricht, vóórdat de akte van oprichting is openbaar gemaakt en de zaak van de coöperatieve vereniging in het handelsregister is ingeschreven, hoofdelijk voor het geheel aan derden verbonden, onverminderd de aansprakelijkheid van de coöperatieve vereniging, voor zover binnen de grenzen van de akte van oprichting is gehandeld.

4. Wat niet openbaar gemaakt is, geldt niet tegen derden te goeder trouw.

Artikel 8

De coöperatieve vereniging is rechtspersoon.

Artikel 9

Voor zover de statuten niet anders bepalen, is het lidmaatschap van een coöperatieve vereniging persoonlijk.

Artikel 10

Vervallen.

Artikel 11

1. Het lidmaatschap van een coöperatieve vereniging wordt schriftelijk bij het bestuur der vereniging aangevraagd.

2. Aan de aanvrager wordt eveneens schriftelijk door of vanwege het bestuur bericht, dat hij als lid is toegelaten of geweigerd.

3. Indien de aanvrager als lid is toegelaten, wordt hem tevens medegedeeld onder welk nummer hij als lid in de boeken der coöperatieve vereniging is ingeschreven.
4. Niettemin behoeft ten bewijze van de verkrijging van het lidmaatschap van een schriftelijke aanvraag en een schriftelijk bericht als bedoeld in de vorige leden van dit artikel niet te blijken.
5. De geschriften, waarbij het lidmaatschap wordt aangevraagd van coöperatieve verenigingen, waarbij de leden op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor de verbintenissen der vereniging, worden gedurende ten minste dertig jaren door het bestuur bewaard. Echter behoeven de hier bedoelde geschriften niet te worden bewaard voor zover betreft hen, van wie het lidmaatschap kan blijken uit een gedagtekende en door hen ondertekende verklaring in de boeken der coöperatieve vereniging.
6. Tenzij de statuten der coöperatieve vereniging anders bepalen, wordt over de toelating tot het lidmaatschap door het bestuur beslist en heeft een aanvrager, die door het bestuur is afgewezen, gedurende dertig dagen na den dag der schriftelijke mededeling van de afwijzing, recht van hoger beroep op de algemene vergadering van leden.

Artikel 12

1. Met behoud der vrijheid van uittreding uit de coöperatieve vereniging kunnen daaraan in de statuten voorwaarden in overeenstemming met haar doel en strekking worden verbonden.
2. Een voorwaarde, welke verder gaat dan geoorloofd is, wordt in zoverre voor niet geschreven gehouden.
3. De opzegging van het lidmaatschap kan alleen geschieden tegen het eind van het boekjaar.
4. Indien bij de statuten geen termijn voor de opzegging is bepaald, dan kan zulks alleen geschieden met inachtneming van een termijn van ten minste dertig dagen.

Artikel 13

1. De opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden bij aangetekend schrijven of ander afzonderlijk schriftuur, hetzij bij een gedagtekende en door het lid ondertekende verklaring in de boeken van de coöperatieve vereniging.
2. Ingeval van opzegging bij aangetekend schrijven wordt de dag, waarop het schrijven aan de dienst der posten is toevertrouwd, beschouwd als de dag van opzegging.
3. Het lid, dat de opzegging doet, ontvangt daarvan een schriftelijke erkenning van het Bestuur der coöperatieve vereniging.
4. Wordt deze schriftelijke erkenning niet binnen veertien dagen na de dag, waarop de opzegging heeft plaats gevonden, gegeven, dan is het lid bevoegd om op kosten der coöperatieve vereniging de opzegging bij deurwaardersexploijt te herhalen.

Artikel 14

1. Door het verlies der vereisten voor het lidmaatschap gesteld, gaat dit niet verloren.
2. In dit geval kan het lidmaatschap door het bestuur, krachtens besluit der algemene vergadering, aan het lid worden opgezegd met inachtneming van het bij het derde en vierde lid van artikel 12 bepaalde.

Artikel 15

Indien bij de statuten niet anders is bepaald, geldt voor ontzetting van het lidmaatschap: dat zij kan geschieden op grond dat een lid in strijd met de statuten van de coöperatieve vereniging handelt of opzettelijk de coöperatieve vereniging benadeelt;

dat zij wordt uitgesproken door het bestuur der coöperatieve vereniging onder vermelding der feiten, waarop het besluit tot ontzetting is gegrond, van welk besluit het bestuur schriftelijk mededeling doet aan het betrokken lid, dat gedurende dertig dagen na de dag van ontvangst van die mededeling recht van beroep op de algemene vergadering van leden heeft.

Artikel 16

1. Door het bestuur van de coöperatieve vereniging wordt nauwkeurig boek gehouden van de toetreding en uittreding van de leden.
2. Is de uittreding een gevolg van overlijden van een lid, dan wordt daarvan aantekening gedaan, zodra het overlijden aan het bestuur bekend wordt.

Artikel 17

1. Het bestuur maakt bij de oprichting van de coöperatieve vereniging en bij de aanvang van ieder boekjaar een lijst op der leden met vermelding van de woonplaats van ieder lid en, indien een lid het bedrag der inleggelden, waarvoor hij heeft deel genomen, ten volle betaald heeft, met vermelding daarvan.
2. Indien een lid het bedrag der inleggelden, waarvoor hij heeft deel genomen, niet ten volle betaald heeft, wordt het onbetaald gebleven gedeelte op de ledenlijst achter zijn naam vermeld.
3. Tegelijk met de inschrijving van de zaak der coöperatieve vereniging in het handelsregister wordt door het bestuur een gedagtekend en door het bestuur ondertekend afschrift van de eerste ledenlijst ten kantore van het handelsregister neergelegd.
4. Binnen dertig dagen na het eind van ieder boekjaar wordt door het bestuur een schriftelijke opgave van de wijzigingen die de ledenlijst in de loop van het afgelopen boekjaar heeft ondergaan, onder welke wijzigingen mede begrepen worden de betalingen van verschuldigde inleggelden in het afgelopen boekjaar, aan de ten kantore van het handelsregister neergelegde lijst toegevoegd, of wordt, zo de Kamer van Koophandel en Fabrieken dit nodig oordeelt, een nieuwe lijst neergelegd.

Artikel 18

1. Blijkt bij gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening van een coöperatieve vereniging, dat haar bezittingen ontoereikend zijn om aan haar verbintenissen te voldoen, dan zijn zij, die bij haar ontbinding leden waren of minder dan één jaar tevoren hebben opgehouden leden te zijn, tegenover de vereffenaars voor gelijke delen van het tekort aansprakelijk.
2. Wanneer de coöperatieve vereniging wordt ontbonden door haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of wanneer de coöperatieve vereniging bij vonnis van de rechter ontbonden is verklaard, delen in de aansprakelijkheid, behalve de leden, allen, die minder dan een jaar vóór de faillietverklaring of vóór de ontbonden verklaring of daarna hebben opgehouden leden te zijn.
3. Kan op een of meer leden of oud-leden zijn evenredig aandeel in het tekort niet worden verhaald, dan zijn voor het ontbrekende de overige leden en oud-leden, mede voor gelijke delen, aansprakelijk.
4. Het geval, dat op een der leden of oud-leden zijn evenredig aandeel in het tekort niet kan worden verhaald, wordt geacht aanwezig te zijn, indien de curator in het faillissement der coöperatieve vereniging, of de curator, bedoeld in het derde lid van artikel 36, met machtiging van de rechter-commissaris afziet van het uitoefenen van het verhaalsrecht op grond dat door de uitoefening van dat recht een bate voor de boedel niet zou worden verkregen.

5. In geen geval kan de termijn, waarbinnen leden, nadat zij hebben opgehouden leden te zijn, aansprakelijk blijven, korter worden gesteld dan in het eerste en tweede lid van dit artikel is bepaald.

Artikel 19

1. Bij de statuten kan van de regeling in het eerste, tweede en derde lid van artikel 18 verrat, worden afgeweken, ook zo, dat de aansprakelijkheid der leden zal bestaan buiten het geval van vereffening der coöperatieve vereniging en rechtstreeks tegenover haar schuldeisers.
2. Bij de statuten kan worden bepaald, dat elke aansprakelijkheid der leden voor de verbintenissen der coöperatieve vereniging zal zijn uitgesloten.

Artikel 20

1. Het staat de rechter vrij om aan de boeken en bescheiden der coöperatieve vereniging, ook ter zake van de verkrijging en van het verlies van het lidmaatschap, zodanige bewijskracht toe te kennen, als hij in ieder geval zal vermenen te behoren.
2. De artikelen 6, 7 en 8 van het Surinaams Wetboek van Koophandel, voor zover niet reeds van toepassing, worden van overeenkomstige toepassing verklaard.

Artikel 21

Behoudens hetgeen bij artikel 22 is bepaald, hebben alle leden toegang tot de algemene vergadering van leden en hebben zij daar, indien de statuten niet anders bepalen, ieder één stem.

Artikel 22

1. Indien de coöperatieve vereniging ten minste twee-honderd leden telt, kan bij de statuten worden bepaald, dat de algemene vergadering zal bestaan uit een door de leden gekozen raad van ten minste twintig leden.
2. De verkiezing, het aantal leden en alle verdere bijzonderheden, de ledenraad betreffende, worden, met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, bij de statuten geregeld, met dien verstande, dat de ledenraad ontbonden is, indien het aantal leden der coöperatieve vereniging beneden de tweehonderd daalt.

Artikel 23

Tenzij de statuten anders bepalen, treden de voorzitter en de secretaris van het bestuur, of hunne vervangers, als zodanig ook op bij de algemene vergadering.

Artikel 24

1. Op schriftelijk verzoek van ten minste één vijfde der leden of, zo er een ledenraad is, van ten minste één vijfde der leden van die raad, is het bestuur tot het bijeenroepen van een algemene vergadering verplicht.
2. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen na ontvangst daarvan geen gevolg wordt gegeven, en de vergadering niet binnen dertig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, kunnen de verzoekers zelf tot het bijeenroepen van die vergadering overgaan bij oproeping in het Gouvernements-Advertentie-Blad, benevens in één of meer plaatselijke nieuwsbladen, tenzij in de statuten de wijze van bijeenroeping der algemene vergadering voor dit geval anders is geregeld.
3. De bevoegdheid, bij dit artikel toegekend, kan bij de statuten niet worden beperkt.

Artikel 25

1. In de statuten der coöperatieve vereniging kan geen verandering worden gebracht, indien niet bij de oproeping tot de algemene vergadering is medegedeeld, dat aldaar wijziging der statuten zal worden voorgesteld.
2. De termijn van oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging der statuten bedraagt ten minste zeven dagen.
3. Degenen, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging der statuten hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de dag, waarop die algemene vergadering zal worden gehouden, een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de coöperatieve vereniging neerleggen ter inzage voor ieder lid tot na afloop der vergadering.
4. Bij gebreke van voldoening aan het in het eerste, tweede en derde lid van dit artikel bepaalde kan over het voorstel tot wijziging der statuten van de coöperatieve vereniging niet wettelijk worden besloten.

Artikel 26

1. Het bestuur der coöperatieve vereniging wordt door de algemene vergadering benoemd.
2. De statuten kunnen echter een andere wijze van benoeming, mits door de leden, voorschrijven.
3. Het in het eerste en tweede lid van dit artikel bepaalde geldt ook voor de benoeming van commissarissen, indien deze er krachtens de statuten zijn, onverminderd het bepaalde bij het volgend lid.
4. Bij de statuten kan worden bepaald, dat ten hoogste één derde van het aantal commissarissen door één of meer personen, die niet behoeven te zijn leden der coöperatieve vereniging, kan worden aangewezen.
5. Tenzij de statuten anders bepalen, bestaat het bestuur uit vijf personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

Artikel 27

1. Indien in de statuten het toezicht op het beheer der coöperatieve vereniging niet geregeld is, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van drie leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
2. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt van haar bevindingen verslag uit aan de algemene vergadering van leden.
3. Het bestuur is verplicht aan die commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar, desgewenst, de kas en de waarden te vertonen, en inzage van de boeken en de bescheiden van de coöperatieve vereniging te geven.
4. De commissie is bevoegd zich op kosten der coöperatieve vereniging door ten hoogste twee, door de commissie aan te wijzen deskundigen te doen bijstaan.

Artikel 28

1. De leden van het bestuur en de commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen, behoudens het bepaalde bij de volgende leden van dit artikel.
2. Indien de Statuten overeenkomstig het tweede en derde lid van artikel 26 voorschrijven, dat de benoeming van de leden van het bestuur of van commissarissen niet geschiedt door de algemene vergadering, regelen zij tevens de wijze van ontslag, met dien verstande, dat de last der leden van het bestuur of van de commissarissen te allen tijde herroepelijk is, ook indien zij voor een bepaalde tijd zijn aangesteld.

3. De commissarissen, bedoeld bij het vierde lid van artikel 26, kunnen te allen tijde worden ontslagen door hen, die tot de benoeming bevoegd zijn.
4. Ook de last der in artikel 27 bedoelde commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

Artikel 29

1. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatieve vereniging in en buiten rechte.
2. Bij de statuten kan worden bepaald, dat een of meer leden van het bestuur voor de coöperatieve vereniging kunnen optreden en tekenen.

Artikel 30

1. Het bestuur doet op een algemene vergadering binnen de eerste zes maanden na afloop van het boekjaar, onder overlegging der nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beheer.
2. Na verloop van die termijn van zes maanden kan ieder lid die rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
3. De rekening en verantwoording wordt door het bestuur binnen dertig dagen na haar goedkeuring neergelegd ten kantore van het handelsregister.

Artikel 31

1. Iedere bestuurder is tegenover de coöperatieve vereniging aansprakelijk wegens tekortkomingen bij de vervulling van de hem opgedragen taak.
2. Indien een tekortkoming betreft een aangelegenheid, welke behoort tot de werkring van meer dan één bestuurder, zijn deze allen deswege hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk.
3. Niet aansprakelijk is de bestuurder, die bewijst, dat de tekortkoming aan hem niet te wijten is en dat hij zo spoedig als mogelijk de in zijn bereik liggende maatregelen heeft genomen om de gevolgen daarvan af te wenden.
4. Voor de toepassing van het tweede en derde lid van dit artikel wordt de bestuurder geacht kennis te hebben gekregen van al datgene, wat hem bij een richtige waarneming zijner betrekking niet onbekend gebleven zou zijn.

Artikel 32

Met afwijking in zoverre van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor het geheel zal de rechter, indien de bestuurder, van wie schadevergoeding wordt gevorderd, bewijst, dat de door de coöperatieve vereniging geleden schade slechts voor een betrekkelijk gering deel aan zijn schuld of nalatigheid te wijten is, bij de vaststelling van het bedrag der door deze verschuldigde schadevergoeding met deze omstandigheid rekening houden.

Artikel 33

Het bij de artikelen 31 en 32 bepaalde omtrent de aansprakelijkheid van bestuurders geldt mede voor de aansprakelijkheid van commissarissen.

4 Ingev. bij G.B. 1968 no. 82.

5 Gew. bij G.B. 1968 no. 82.

6 Gew. bij G.B. 1968 no. 82.

Artikel 33a

1. Er is een Raad voor het Coöperatiewezen. De samenstelling en nadere taakomschrijving van deze Raad worden bij staatsbesluit geregeld.

2. Elke coöperatieve vereniging is verplicht de Raad voor het Coöperatiewezen of een door de Raad schriftelijk daartoe gemachtigde op diens verzoek inzage van haar boeken en bescheiden te geven en alle gewenste inlichtingen, de vereniging betreffende, te verstrekken.

Artikel 34

De coöperatieve vereniging wordt ontbonden door:

- 1o. het verstrijken van de tijd, voor welke zij is aangegaan;
- 2o. een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering;
- 3o. haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard;
- 4o. het vonnis, waarbij de coöperatieve vereniging ontbonden wordt verklaard.

Artikel 35

1. In de gevallen, bij artikel 34 voorzien, blijft de coöperatieve vereniging bestaan, voor zover dit voor haar vereffening nodig is.
2. Behoudens in geval van faillissement, en in geval van ontbonden verklaring door de rechter is het bestuur der coöperatieve vereniging met de vereffening belast, tenzij de statuten daaromtrent anders bepalen.

Artikel 36

1. De Procureur-Generaal is bevoegd, de Raad voor het Coöperatiewezen gehoord, van de Kantonrechter, binnen wiens ressort de coöperatieve vereniging gevestigd is, de ontbinding te vorderen van de vereniging, welke niet op coöperatieve basis werkzaam is of welke werkzaam is in strijd met de goede zeden, de openbare orde of haar statuten.
2. De rechter, de coöperatieve vereniging ontbonden verklarende, bepaalt tevens het tijdstip, waarop de ontbinding gerekend wordt een aanvang te hebben genomen.
3. Het vonnis, waarbij de coöperatieve vereniging ontbonden wordt verklaard, houdt in de benoeming van een of meer curators; de kantonrechter, die het vonnis in eerste aanleg heeft uitgesproken, treedt op als rechter-commissaris.
4. De vereffening van de zaken der ontbonden coöperatieve vereniging geschiedt door de curator onder toezicht van de rechter-commissaris overeenkomstig de bepalingen van de Surinaams Faillissementswet 1935.

Artikel 37

7 Gew. bij G.B. 1968 no. 82.

1. Het besluit of het vonnis, waarbij de coöperatieve vereniging ontbonden wordt ontbonden wordt verklaard, moet door de vereffenaar of door de curator in het Gouvernements-Advertentie-Blad worden afgekondigd.
2. Van de ontbinding of van de ontbonden verklaring wordt tevens door de vereffenaar of door de curator opgave gedaan aan de Raad voor het Coöperatiewezen en ten kantore van het handelsregister ter inschrijving.
3. Aanspraken, door derden te goeder trouw verkregen vóórdat de aankondiging en de opgave zijn geschied, worden geëerbiedigd.

Artikel 38

In geval van gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening der coöperatieve vereniging, zijn met inachtneming van wat in de statuten ten aanzien van de aansprakelijkheid der leden voor de verbintenissen der coöperatieve vereniging is bepaald, en behoudens het geval van uitsluiting daarvan, de aansprakelijke leden en oud-leden gehouden tot onmiddellijke betaling van hun aandeel in een geraamd tekort, vermeerderd met vijftig ten honderd of zoveel minder als de curator of de vereffenaar voldoende acht, tot voorlopige

dekking van een nadere omslag voor de kosten van invordering en van het aandeel van hen, die in gebreke mochten blijven aan hun verplichting te voldoen.

Artikel 39

Alle akten en geschriften betreffende het aangaan, wijzigen of eindigen van een coöperatieve vereniging benevens alle stukken, hetzij in onderhandse vorm hetzij door of ten overstaan van een openbaar ambtenaar ter uitvoering van deze wet, van de Handelsregisterwet 1936 (G.B. No. 149, geldende tekst G. B. 1937 No. 144) voor zover coöperatieve verenigingen betreft, van de akte van oprichting of van krachtens de akte van oprichting in het leven geroepen en bestaande reglementen opgemaakt, behalve die van leges en zegel op het verzoekschrift aan de President, zijn vrij van zegel en van de kosten, voortvloeiende uit de toepassing van artikel 1901 van het Surinaams Burgerlijk Wetboek.

STRAFBEPALING

Artikel 40

1. Met een geldboete van ten hoogste duizend gulden worden gestraft de bestuurders van een coöperatieve vereniging, die niet voldoen:

a. aan hun verplichting om, in de gevallen waarin dat is voorgeschreven, de geschriften te bewaren, waarbij het lidmaatschap der vereniging wordt aangevraagd;

b. aan hun verplichting tot het nauwkeurig boekhouden van de toe- en uittreding der leden van de vereniging;

c. aan hun verplichting om, in de gevallen waarin dat is voorgeschreven, tegelijk met de inschrijving van de handelszaak der vereniging een ledenlijst ten kantore van het handelsregister neder te leggen of binnen dertig dagen na het einde van ieder boekjaar een schriftelijke opgaaf van de wijzigingen, die de ledenlijst in de loop van dat boekjaar heeft ondergaan, aan de ten kantore van het handelsregister neergelegde lijst toe te voegen, of op verlangen der Kamer van Koophandel en 8 I.w.t 18 juli 1944 (G.B. 1944 no. 106).

Fabrieken een nieuwe lijst neer te leggen;

d. aan hun verplichting om de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 30 dezer wet, binnen dertig dagen na haar goedkeuring neer te leggen ten kantore van het handelsregister;

e. aan hun verplichting om aan de Raad voor het Coöperatiewezen of een door die Raad schriftelijk daartoe gemachtigde inzage te geven van de verlangde boeken of bescheiden of de gewenste inlichtingen te verstrekken.

2. Met een geldboete van ten hoogste honderd gulden worden gestraft de bestuurders der coöperatieve vereniging wanneer het voorschrift van artikel 2, laatste lid, wordt overtreden.

3. Deze feiten worden als overtredingen beschouwd.

OVERGANGSBEPALING

Artikel 41

1. Verenigingen, die vóór de inwerkingtreding van deze wet bij besluit van de President als zedelijk lichaam zijn erkend en als rechtspersoon optreden en wier statuten beantwoorden aan de omschrijving van de coöperatieve vereniging, zoals neergelegd in artikel 1 dezer wet, worden na de inwerkingtreding van deze wet beheerst door de bepalingen daarvan.

2. De statuten der vereniging zullen daartoe binnen 3 maanden na het in werking treden van deze wet in overeenstemming met haar bepalingen moeten worden gebracht. Het besluit tot wijziging tot dit doel wordt in afwijking van artikel 25 overeenkomstig de bestaande statuten der vereniging genomen.

3. Niet voldoening aan het gestelde in het tweede lid geeft aan het openbaar ministerie de bevoegdheid om bij de burgerlijke rechter de vervallenverklaring der vereniging van haar hoedanigheid van rechtspersoon te vorderen. De artikelen 1681 en 1682 van het Surinaams Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

SLOTBEPALING

Artikel 42

1. Deze wet treedt in werking op een nader door de President te bepalen tijdstip.
2. Zij kan worden aangehaald onder de titel "Wet Coöperatieve Verenigingen 1944".

4.34. TRINIDAD Y TOBAGO

CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT

CHAPTER 81:03

LAWS OF TRINIDAD AND TOBAGO

Act 22 of 1971

Amended by

7 of 1972

24 of 1976

*24 of 1981

†18 of 1993

(*† See Note on page 2)

Current Authorised Pages

Pages Authorised

(inclusive) by L.R.O.

1-65 .. 1/2006

L.R.O. 1/2006

MINISTRY OF LEGAL AFFAIRS www.legalaffairs.gov.tt

UNOFFICIAL VERSION

UPDATED TO DECEMBER 31ST 2011

LAWS OF TRINIDAD AND TOBAGO

2 Chap. 81:03 *Co-operative Societies*

Index of Subsidiary Legislation

Page

Junior Co-operative Societies (Registration Fee Exemption) Order

(GN 77/1974) 39

Co-operative Societies Regulations (GN 255/1971) 40

Note on Act No. 24 of 1981

Sections 29 and 73(2) of this Act have been amended by Act No. 24 of 1981.

However,

Act No. 24 of 1981 had not up to the date of the revision of this Act, been brought into operation.

Note on Act No. 18 of 1993

See sections 62 and 65 of Act No. 18 of 1993 and the Third Schedule thereof.

CHAPTER 81:03

**CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT
ARRANGEMENT OF SECTIONS
SECTION**

- 1. Short title.**
- 2. Interpretation.**

**PART I
ADMINISTRATION**

- 3. Commissioner for Co-operative Development.**
- 4. Powers of Commissioner.**
- 5. Commissioner to have access to books, etc., of society.**
- 6. Costs of inquiry.**

**PART II
REGISTRATION AND MEMBERSHIP**

- 7. Restriction on use of the terms “co-operative” and “credit union”.**
- 8. Societies eligible to be registered.**
- 9. Conditions of registration.**
- 10. Qualification for membership.**
- 11. Rights and liabilities of infant members.**
- 12. Rights of membership not to be exercised until payment made.**
- 13. Person not to be member of more than one society.**
- 14. Voting rights.**
- 15. Limitation on interest of member of a society with limited liability.**
- 16. Application for registration.**
- 17. Registration of society.**
- 18. Commissioner may cancel registration of society.**
- 19. Evidence of registration.**
- 20. Society becomes body corporate on registration, etc.**
- 21. Amendment of bye-laws.**

**PART III
DUTIES, PRIVILEGES AND BUSINESS
OF SOCIETIES**

- 22. Constitution and management of society.**
- 23. Certificate of registration to be displayed at registered address.**
- 24. Act, regulations, etc., to be available for inspection at registered address.**
- 25. Admissibility of copy of entry as evidence.**
- 26. Production of books, etc., legal proceedings.**
- 27. Disposal of members’ produce through a society.**
- 28. Loans by society to member.**
- 29. Creation of charge in favour of society.**
- 30. Execution and registration of charges.**
- 31. Effect of charge registered under Ordinance.**
- 32. Claims of Government, etc., not to be affected.**
- 33. Prior claim of society.**
- 34. Enforcement of charge.**
- 35. Assignment of charges.**
- 36. Charge, lien and set off in respect of shares or interest.**
- 37. Bond as additional security for loan to member.**
- 38. Validity of payments.**

- 39. Restriction on transfer of shares or interest.
- 40. Shares or interest not liable to attachment.
- 41. Transfer of share or interest on death of member.
- 42. Liability of past member and estate of deceased member for debts of society.

PART IV

PROPERTY AND FUNDS OF SOCIETIES

- 43. Restriction on loans.
- 44. Society may receive deposits and loans.
- 45. Investment of funds.
- 46. Restriction on dividend.

ARRANGEMENT OF SECTIONS—*Continued* **SECTION**

- 47. Reserve fund.
- 48. Restriction on distribution of surplus.
- 49. Pension fund.
- 50. Contribution to charitable purpose.
- 51. Audit.

PART V

RECONSTRUCTION OF SOCIETIES

- 52. Reconstruction of societies.
- 53. Amalgamation of societies.
- 54. Transfer of societies.
- 55. Claims of objecting creditor to be satisfied.
- 56. Division of societies.
- 57. Effect of registration of new societies.

PART VI

WINDING UP

- 58. Winding up.
- 59. Society may be wound up if membership is reduced.
- 60. Power of Commissioner on issuing a winding up order.
- 61. Powers of a liquidator.
- 62. Effect of cancellation of registration.
- 63. Bar of action in reconstruction, winding up and dissolution matters.
- 64. Disposal of surplus assets.
- 65. Power of Commissioner to surcharge officers, etc., of registered society.
- 66. Attachment of property.

PART VII

DISPUTES

- 67. Settlement of disputes.
- 68. Case stated on question of law.

SECTION

PART VIII

OFFENCES

- 69. Corrupt practice and bribery.

- 70. Falsely obtaining, withholding, or misapplying property of society.
- 71. Offences.
- 72. Dealing with property subject to a charge.
- 73. Penalty for offences not otherwise provided for.

PART IX MISCELLANEOUS

- 74. Appeals.
- 75. Delegation of powers.
- 76. No stamp duty, etc., payable on instrument.
- 77. Provisions of Companies Act not to apply.
- 78. Act not to apply to Trinidad Co-operative Bank.
- 79. Saving for existing societies, bye-laws, rules, regulations, etc.
- 80. Power to exempt societies from provisions of Act.
- 81. Regulations.

ARRANGEMENT OF SECTIONS—*Continued*

SECTION

CHAPTER 81:03

CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT

An Act to amend, consolidate and re-enact the laws relating to co-operative societies, credit union societies and agricultural credit societies.

[9TH JUNE 1971]

1. This Act may be cited as the Co-operative Societies Act.

2. In this Act— “board” means the board of management or other directing body to whom the management of the affairs of a society is entrusted;

“bonus” means a share of the surplus of a society divided among its members in proportion to the volume of business done with the society by them from which the surplus of the society was derived; “Commissioner” means the Commissioner for Co-operative Development under this Act;

“credit union” means a society which has as its objects the promotion of thrift and the creation of a source of credit for its members, the majority of whom are not agriculturists, for provident or productive purposes; “dividend” means a share of the surplus of a society distributed to its members in proportion to the paid up share capital held by them; “member” includes a person or society joining in the application for the registration of a society and a person or society admitted to membership after registration in accordance with the bye-laws of that society; “officer” includes the Chairman or President, secretary, treasurer, member of the board or other person empowered under the regulations or under the bye-laws of a society to give directions with regard to the business of that society;

22 of 1971.

Commencement.

Short title.

Interpretation.

[7 of 1972].

“seal” includes a rubber stamp; “society” means a society registered or deemed to have been registered under this Act.

PART I ADMINISTRATION

3. There shall be a Commissioner for Co-operative Development hereinafter called “the Commissioner”, who shall have general powers of supervision of the affairs of societies and shall perform the duties of registrar of societies.

4. (1) In the exercise of his powers of supervision referred to in section 3 the Commissioner may—

(a) on his own motion;

(b) on the application of a creditor of a society;

(c) in accordance with regulations made in that behalf, on the requisition of a society in respect of one of its members being itself a society; or

(d) on the application of a majority of members of the board of management or one-third of the members of a society, hold an inquiry into the constitution, operations and financial position of that society and in the course of such inquiry shall inspect the books, accounts and other records of the society.

(2) Where having held an inquiry under this section the Commissioner is of the opinion that the board has mismanaged the affairs of the society or otherwise performed its duties improperly, he may by notice to the society call upon it to remedy the situation within three months from the date of such notice.

(3) Where a society fails to comply with the notice referred to in subsection (2), the Commissioner may, after giving the board an opportunity to be heard in general meeting called by him for the purpose, order the dissolution of the board and direct that the affairs of the society be managed by such persons as he may appoint for a period not exceeding two years.

Commissioner for Co-operative Development.

Powers of Commissioner.

(4) Persons appointed by the Commissioner under this section shall exercise all the powers and perform all the functions as a duly constituted board and in particular shall make arrangements prior to the end of their term of management for the election of a new board in accordance with the bye-laws of the society.

(5) The Commissioner may determine the remuneration and expenses to be paid to the persons appointed under this section and any moneys required for this purpose shall be payable from the funds of the society.

(6) Nothing in this section shall derogate from the power of the Commissioner to cancel the registration of any society should he think fit.

(7) Where a creditor applies to have an inquiry instituted he shall first satisfy the Commissioner that his debt is due and that payment was demanded and not satisfied and he shall deposit as security towards the cost of the inquiry such sum as the Commissioner may determine.

5. The Commissioner shall at all times have access to the books, accounts, records and securities of a society and is entitled to inspect the cash in hand, and every officer of a society shall furnish such information respecting the operation and transactions of a society as the Commissioner may require.

6. (1) The Commissioner may apportion the costs of an inquiry or any part thereof between the society and the person requiring the inquiry but no such apportionment may be made unless the parties liable to pay the costs thereunder are given an opportunity of being heard.

(2) Costs may be recovered from any party liable to pay the same on the application of the Commissioner to the Magistrate of the district in which such party resides or carries on

business and the Magistrate may issue a warrant of distress upon and may order the sale of any personal property belonging to such party so however that no such property may be sold until after the expiration of five clear days from the date of the levy. Commissioner to have access to books, etc., of society. Costs of inquiry.

PART II REGISTRATION AND MEMBERSHIP

7. No undertaking may style itself a co-operative or credit union society or have the term “co-operative” or “credit union” in its name or hold itself out as being operated in accordance with co-operative principles unless it is registered under this Act.

8. (1) Subject to section 9, any society established for the promotion of the economic welfare of its members in accordance with co-operative principles or a society established to facilitate the operations of such a society is eligible to be registered under this Act.

(2) A society may be established with or without limited liability save that, unless the Minister by general or special order otherwise directs—

(a) a society of which a member is another society shall have limited liability;

(b) a society the primary object of which is the creation of funds to be lent to its members, the majority of whom are agriculturists and of which no other society is a member shall have unlimited liability and the members of such society shall only on its liquidation, be jointly and severally liable for and in respect of all its obligations.

9. (1) No society, other than a society of which another society is a member, may be registered, under this Act unless its membership consists—

(a) of at least twelve members of full age; or

(b) solely of members of a school, club or cultural organisation, all under the age of twenty-one years.

(2) No society may be registered unless there exists among its members none of whom is another society, some common bond of occupation or association or of residence in a defined neighbourhood or district.

Restriction on use of the terms “co-operative” and “credit union”.

Societies eligible to be registered.

(3) The word “co-operative” shall form part of the name of every society and a society whose membership is as described in subsection (1)(b) shall be called a junior co-operative society.

(4) The word “limited” shall be the last word in the name of every society with limited liability.

10. (1) Subject to subsection (2), in order to qualify for membership in a society other than a junior co-operative society membership, individual must—

(a) have attained the age of sixteen years; and

(b) reside or occupy land or carry on business in the area in which the society operates.

(2) Where the society is a credit union, an individual who has not yet attained the age of sixteen years may be admitted as a member and may enjoy all the rights of membership save that where such member is required to execute any instrument or give any acquittance he may, if he has attained the age of fourteen years, execute such instrument and give such acquittance himself and if he has not attained the age of fourteen years he may do so only by his parent or guardian.

11. (1) Subject to subsection (2) an infant duly admitted as a member of a society shall enjoy all the rights and be subject to all the liabilities of membership and notwithstanding any law to the contrary all contracts entered into by him as a member shall be enforceable at law.

(2) An individual who has not attained the age of eighteen years shall not be an officer of a society but may be an employee of a society; this subsection shall not apply to junior co-operative societies.

12. A person may not exercise the rights of membership of a society unless he has paid such membership fee or acquired such interest as may be specified in the bye-laws.
Qualification for membership.

Rights and liabilities of infant members.

Rights of membership not to be exercised until payment made.

13. Where the primary object of a society with unlimited liability is to grant loans to its members, no person may be a member of more than one such society unless the Commissioner so directs; but a person may be a member of more than one society with limited liability unless the Commissioner otherwise directs.

14. (1) There shall be no voting by proxy and subject to any special provisions in the bye-laws relating to the voting rights of members who are themselves other societies, a member of a society shall have one vote except where such member is the Chairman of any meeting of the society in which case if there is an equality of votes he shall have a casting vote in addition to his original vote.

(2) A society that is a member of another society shall exercise its voting rights in that other society through one of its members duly appointed in that behalf.

15. Where the liability of the members of a society is limited by shares, no member not being another society, may hold more than one-fifth of the shares of that society.

16. (1) Application for registration shall be made to the Commissioner on the prescribed form, signed—

(a) in the case of a society of which no member is another society, by at least twelve members of full age;

(b) in the case of a society, the members of which consist solely of other societies by a duly authorised person on behalf of every such other society;

(c) in the case of a society the members of which consist of other societies and individuals by a duly authorised person on behalf of each such other society and twelve individuals of full age and where there are less than twelve such individuals by all of them;

(d) in the case of a junior co-operative society by twelve of the members.

Person not to be member of more than one society.

Voting rights.

Limitation on interest of member of a society with limited liability.

Application for registration.

(2) The application shall be accompanied by three copies of the proposed bye-laws of the society and such other information including the address of the office of the society, as the Commissioner may require.

(3) There shall be payable to the Commissioner on every application under this section a prescribed fee.

17. The Commissioner may, on being satisfied that a society has complied with the provisions of this Act and the regulations and that its proposed bye-laws are not contrary to co-operative principles, approve the bye-laws and register the society.

18. (1) Subject to this section, the Commissioner may, if he thinks fit, at any time cancel the registration of a society and where such registration is cancelled the society shall be deemed to have been dissolved from the date on which its affairs are wound up.

(2) The Commissioner shall, before exercising the power conferred on him by subsection (1), signify his intention to cancel the registration of a society—

(a) by registered letter addressed to the Board; and

(b) by notice published in the *Gazette*.

(3) Any officer or member of a society who is aggrieved by a decision of the Commissioner to cancel the registration of the society, may within three months of the publication of the notice in the *Gazette* pursuant to subsection (2)(b), appeal therefrom within the periods and in the manner specified in section 74.

(4) On the expiration of the three-month period referred to in subsection (3) or, where there is an appeal, on its determination by means of dismissal, the Commissioner shall commence to wind up the affairs of the society and shall issue a winding-up order.

19. The issue to the society of a certificate of registration signed by the Commissioner, notice of which shall be published in the *Gazette*, shall be conclusive evidence that the society is duly registered unless it is proved that the registration was subsequently cancelled.

Registration of society.

Commissioner may cancel registration of society.

[24 of 1976].

Evidence of registration.

20. The registration of a society shall thereupon establish it a body corporate to be known by the name under which it is registered and the address referred to in section 16 shall become the registered address of the society.

21. A society may at any time amend its bye-laws by resolution passed at a general meeting called for the purpose but no such amendment shall be of any effect until approved by the Commissioner, for which purpose three copies of the amendment shall be forwarded to him and should the Commissioner approve the amendment one copy indicating his approval shall be returned to the society.

PART III

DUTIES, PRIVILEGES AND BUSINESS OF SOCIETIES

22. Every society shall be constituted and managed in accordance with its bye-laws and the Regulations.

23. Every society shall have its certificate of registration prominently displayed at its registered address.

24. (1) There shall be available at all reasonable times at the registered address of a society—

(a) a copy of this Act and the Regulations made thereunder;

(b) a copy of the bye-laws of the society; and

(c) the register of members and their shareholdings and such other records as may be prescribed.

(2) A copy of an entry in the register of members shall be *prima facie* evidence of the date on which the name of any person was entered in such register as a member or the date on which such person ceased to be a member, as the case may be.

25. A copy of any entry in any register, book or other record kept in the course of business of a society shall, if duly certified in such manner as may be prescribed, be admissible in evidence of Society becomes body corporate on registration, etc.

Amendment of bye-laws.

Constitution and management of society.

Certificate of registration to be displayed at registered address.

Act, Regulations, etc., to be available for inspection at registered address.

Admissibility of copy of entry as evidence.

the existence of the entry and shall be admitted as evidence of the matters and transactions recorded therein in every case where and to the same extent as the original entry would, if produced, have been admissible to prove such matters.

26. No officer of a society may in any legal proceedings to which the society is not a party be compelled to produce any of the registers, books or other records of the society, the contents of which can be proved under section 25 or to appear as a witness to prove the matters or transactions therein recorded, unless the Court so directs.

27. (1) Where a society has among its objects the disposal of any article or produce obtained by the work or industry of its produce members, such society may by its bye-laws provide—

(a) that every member who produces any such article or produce shall under contract in writing agree to dispose of all or any specified amount thereof

to or through the society; and

(b) that any member who acts in breach of his contract shall pay to the society by way of liquidated damages a sum to be ascertained or assessed in

such manner as may be prescribed in the bye-laws.

(2) A contract entered into under this section shall not be questioned in any Court on the ground only that it is a contract in restraint of trade.

28. (1) A society may make advances by way of loan to its members in accordance with its bye-laws.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Banking Act and the Local Savings Banks Act a society shall not be deemed to be engaged in any business in the nature of banking so as to be obliged to obtain a licence under either of those Acts.

(3) A society shall not be required to obtain a licence under the Moneylenders Act in order to carry on the business of moneylending.

Production of books, etc., legal proceedings.

Disposal of members' produce through a society.

Loans by society to member.

Ch. 79:01.

Ch. 79:03.

Ch. 84:04.

29. (1) A member to whom money has been lent by a society or who is otherwise indebted to the society may be required to create a charge in favour of the society in such form as may be prescribed.

(2) A charge shall so long as it continues in force confer on the society the following rights and impose on the society the following obligations, that is to say:

(a) the right upon the happening of any event specified in the charge as being an event authorising the chargee to seize the property subject to the charge to take possession of any property so subject;

(b) after an interval of five clear days or such less time as may be specified in the charge from the date of taking possession of any property subject to the charge to sell such property either by auction or if the charge so provides by

private treaty and either for a lump sum or payment by instalments;

(c) to apply the proceeds of sale in or towards the discharge of the debt secured by the charge and the costs of seizure and sale and to pay any surplus of such proceeds to the member whose property was sold.

(3) A charge shall so long as it continues in force impose on the member the obligation to pay to the society towards the discharge of his indebtedness the proceeds of sale of any property comprised in the charge or any money received under any policy of insurance or by way of compensation in respect of any such property, except insofar as the charge otherwise allows.

(4) It is hereby declared that a charge under this section is not a bill of sale within the meaning of the Bills of Sale Act or a contract within the meaning of the Agricultural Contracts Act or a mortgage under the Mortgages of Produce Ordinance.

Creation of charge in favour of society.

Ch. 82:32.

Ch. 63:50.

Ch. 27 No. 21.

(1950 Ed.).

30. (1) A charge created under section 29 shall be duly executed if signed by the member in duplicate in the presence of the Chairman or the President and the Secretary of the Society.

(2) The Secretary shall file one copy of the charge at the registered address of the society and shall forthwith transmit the other copy to the Registrar General.

(3) The Registrar General shall keep a book to be called "the Register Book of Co-operative Societies' Charges" in which he shall register every charge transmitted to him by the Secretary of a society, and issue to the society a certified copy of the registration.

(4) The registration of a charge under subsection (3) shall constitute a first charge and security in favour of the society and shall be deemed to affect with notice any person dealing with the property comprised in the charge.

(5) As soon as the loan or other indebtedness in respect of which a charge was created is discharged, the Secretary of the society shall record the discharge in the file at the registered address of the society and notify the Registrar General who shall forthwith make an entry of satisfaction in the Register Book of Co-operative Societies' Charges.

(6) Any person may, on payment of the prescribed fee, inspect the Register Book of Co-operative Societies' Charges and take extracts therefrom.

31. Every charge registered in the Register Book of Agricultural Credit Societies' Charges under the Agricultural Credit Societies Ordinance 1954 (now repealed by this Act), and subsisting at the date of the commencement of this Act shall be deemed to have been registered in the Register Book of Co-operative Societies' Charges under this Act and

such charge shall, without prejudice to anything contained therein, have the same force and effect as a charge created under this Act.

Execution and registration of charges.

[7 of 1972].

Effect of charge registered under Ordinance.

[6 of 1954

7 of 1972].

32. Nothing in section 30 shall affect—

(a) any claim of the Government in respect of taxes or money recoverable as such or of a landlord in respect of rent or money recoverable as rent;

(b) the rights of any *bona fide* purchaser for value without notice of the charge; or

(c) the rights of any prior chargee or encumbrances.

33. (1) Subject to any claim in respect of debts due to the State or to a landlord in respect of rent or any money recoverable as rent, any debt or outstanding demand owing to a society by a member or past member shall notwithstanding anything contained in section 29 be a first charge—

(a) upon the crops or other agricultural produce whether standing or severed, raised in whole or in part with the loan from the society by such member or past member; and

(b) upon any cattle, fodder for cattle, agricultural or industrial machinery or implements, or raw materials for use in manufacture or handicraft, or buildings used for the purposes of agriculture or industry, or fishing or fish processing equipment supplied to or purchased by such member or past member in whole or in part from any loan whether in goods or money granted him by the society.

(2) Any person dealing with any of the property specified in subsection (1) shall be deemed to have notice of such first charge and all such dealing shall be subject to the charge and priority created by this Act.

34. A society may enforce a charge by applying to the Magistrate of the district in which the member or past member resides or carries on business or where the property subject to the charge is situate for a warrant of distress by certifying under seal to the Magistrate the amount due and particulars of the property so charged and the Magistrate shall issue a warrant of distress and may order the sale of the property by public auction or private treaty.

Claims of Government, etc., not to be affected.

Prior claim of society.

Enforcement of charge.

35. (1) A society may borrow from any other society or from any bank approved by the Commissioner on the security of any charge executed and registered in accordance with section 30 and may for this purpose assign any such charge to the other society or bank.

(2) An assignment of a charge under this section shall be registered in the same manner as a charge and section 29 shall apply *mutatis mutandis* to an assignment so registered.

(3) An assignment of a charge when registered shall operate as a first charge in favour of the assignee subject to section 32.

(4) Where any charge is assigned to a society established with the object of facilitating the operations of other societies, such society may borrow from any bank approved by the

Commissioner and for this purpose may re-assign any such charge to such bank and subsections (2) and (3) shall apply *mutatis mutandis* to such re-assignment.

36. Notwithstanding anything contained in sections 29, 30, 32, 33 and 37 a society shall have a charge or lien in respect of any debt due from a member or past member upon his shares or interest in the capital and on his deposits and upon any dividend, bonus or surplus payable to him and may set off any sum payable to him in or towards payment of any such debt.

37. (1) A society may require a member to give a bond with or without surety as additional security for the repayment of any loan and any condition thereby imposed on the member relating to the payment of capital and interest shall be strictly observed and performed and on breach of any such condition the bond shall be forthwith forfeited.

(2) Section 35 relating to the assignment of charges shall apply *mutatis mutandis* to the assignment of bonds.

38. (1) A society may receive deposits from an infant and may pay to such infant any such deposit together with the interest accrued thereon.

Assignment of charges.

Charge, lien and set off in respect of shares or interest.

Bond as additional security for loan to member.

Validity of payments.

(2) Any deposit made on behalf of an infant may together with any interest accrued thereon be paid to the parent of the infant or, where the infant is under the care of a guardian, to such guardian for the use of the infant.

(3) For the purposes of this section and section 10(2) the mother of an infant born out of wedlock is the guardian of such infant, except—

(a) there is subsisting a Court order depriving her of the custody of such infant, in which case the guardian shall be the person named in the Court order; or

(b) the infant customarily resides with some person other than the mother in which case that person shall be the guardian.

In paragraph (b) the expression “customarily resides with” includes “is under the care of”.

(4) The receipt of an infant or his parent or guardian, as the case may be, for money received under this section shall be a good and sufficient discharge of the liability of the society in respect of that money.

(5) Where a person under disability other than an infant is entitled to receive from a society any money whatsoever such money shall be paid by the society to the Administrator General to the credit of such person under disability and the receipt of the Administrator General shall be a good and sufficient discharge of the liability of the society to pay that money.

(6) The Administrator General may retain out of any money so paid to him a sum not exceeding three per cent thereof for fees of office and shall pay or apply the remainder to or for the care, maintenance, education or benefit of such person under disability.

39. (1) The transfer of or the creation of a charge on the shares or interest of a member, past member or deceased member in the share capital of a society shall be subject to the conditions as to maximum holding as are provided in section 15.

Restriction on transfer of shares or interest.

(2) A member shall not transfer or create a charge on his shares or interest in a society unless—

- (a) he has held such shares or interest for not less than one year; and
 - (b) the transfer or charge is made to the society or to a person whose application for membership has been accepted by the board.
- (3) Subsection (2) does not apply to credit unions.

40. Subject to section 36, the shares or interest (excluding deposits) of any member in the capital of a society or in any pension fund established under this Act shall, up to a maximum of two thousand dollars, not be liable to attachment or sale under any Court order or decree in respect of any debt or liability incurred by such member and subject to section 41 no person shall be entitled to or have any claim in such share or interest.

41. (1) Where a person has been nominated as beneficiary by a member in accordance with the bye-laws of a society and such nominee is admitted to membership in the society, the society shall within one year of the death of the member by whom the nomination was made, transfer the shares or interest of such deceased member subject to the limit specified in subsection (3) to the nominee. Where, however, such nominee is not admitted to membership in the society or where the deceased member made no such nomination, the society shall within one year of the death of such deceased member pay to the nominee or legal personal representative of the deceased member as the case may be, such sum, not exceeding the said limit, representing the value or part thereof of the deceased member's shares or interest in the society.

(2) Nothing in this section shall be construed as prohibiting a nominee who has been admitted to membership from electing to receive payment representing the value of the deceased member's shares or interest instead of accepting a transfer.

Shares or interest not liable to attachment.

Transfer of share or interest on death of member.

(3) A society shall subject to section 30 and unless prevented by order of a Court of competent jurisdiction pay to such nominee or legal personal representative, as the case may be, a sum not exceeding five thousand dollars due to the deceased member from the society.

All other moneys due to the deceased member from the society shall fall into his estate and be subject in all respects to the laws relating to inheritance including the requirement to pay estate duty.

42. (1) The liability of a past member for the debts of a society as they existed at the time when he ceased to be a member, shall continue for a period of two years from the date of his ceasing to be a member.

(2) The estate of a deceased member is liable for a period of two years from the date of his decease for the debts of a society as they existed at the time of his death.

PART IV

PROPERTY AND FUNDS OF SOCIETIES

43. (1) A society may not, save with the consent of the Commissioner, make a loan to any person other than a member.

(2) A society may not, save with the consent in writing of the Commissioner lend its money on mortgage of real property.

(3) No loan shall be made to an officer of a credit union of a sum in excess of the value of his shares and deposits and accumulated dividends and interests thereon unless such

loan is approved by the vote of a two-thirds majority at a meeting of the other members of the board, the credit committee and the supervisory committee all sitting together or is made with the consent in writing of all the members, other than the borrowing officer, constituting the board, the credit committee and the supervisory committee.

***44.** (1) Subject to the regulations or any bye-laws of a society made for the purpose, a society may receive deposits and loans from persons who are not members of the society for the purpose of meeting any of its obligations or discharging any of its functions under this Act.

*Deemed to have come into operation on 9th June 1971 (see Act No. 24 of 1976, s. 3).

Liability of past member and estate of Deceased member for debts of society.

Restriction on loans.

Society may receive deposits and loans.

[24 of 1976].

(2) A society may by mortgage or in any other manner it deems appropriate guarantee the repayment of any sums received by it pursuant to subsection (1).

45. A society may invest or deposit its funds—

(a) in any bank approved by the Commissioner;

(b) in any securities issued or guaranteed by the Government;

(c) in the shares or on the security of any other society, provided that no such investment shall be made in the shares of any society other than one with limited liability; or

(d) in any other manner permitted by the Commissioner.

46. A society may pay a dividend on share capital to its members at a rate not exceeding that specified in the regulations.

47. (1) Every society that realises a surplus from its transactions shall establish and maintain a reserve fund.

(2) At least one-tenth of the net surplus of the society each year as ascertained by the annual audit shall be credited to the reserve fund, and such reserve fund may, subject to the approval of the Commissioner, be used in the business of the society or may be invested in accordance with section 45.

48. Any balance of the surplus of a society, after making the prescribed provision for the reserve fund, may together with any available surplus of past years, be distributed among its members to the extent and under the conditions prescribed by the regulations and by the bye-laws of the society.

49. A society may establish a contributory pension fund for its servants and employees and may contribute to such pension fund from its net surplus, after the prescribed payments have been made to the reserve fund. Such pension fund shall not be considered part of the assets of the society but shall be invested under section 45.

Investment of funds.

Restriction on dividend.

Reserve fund.

[7 of 1972].

**Restriction on distribution of surplus.
Pension fund.**

50. With the approval of the Commissioner any society after making the prescribed payments to its reserve fund, may—

- (a) set aside a sum not exceeding twenty per cent of its net surplus; and
- (b) at any time utilise that sum in contributing to any public, co-operative or charitable purpose.

51. (1) Every society shall have its accounts audited annually by the Commissioner or some other person authorised by him or, in accordance with regulations made by the Minister in that behalf, by an auditor selected by the society and approved by the Commissioner.

(2) Each society shall pay a fee where the audit is carried out by the Commissioner or some other person authorised by him for that purpose and such fee shall be paid to a fund called “The Supervisory and Audit Fund”, to be administered according to the regulations.

(3) The audit shall include an examination of overdue debts, if any, the verification of cash balances and securities, and a valuation of the assets and liabilities of the society.

(4) The Commissioner or other person auditing the accounts of any society shall have free access to the books, accounts and vouchers of the society.

(5) The members of the board, and all officers of the society shall furnish the Commissioner or other person auditing the accounts with all such information regarding the transactions and operations of the society as may be required.

(6) The Commissioner and every other person appointed to audit the accounts of a society shall have power at the time of the audit—

(a) to summon any officer, agent, servant or member of the society or any other person, whom he has reason to believe can give valuable information regarding any transactions of the society or the management of its affairs, to give such information; or

Contribution to charitable purpose.

(b) to require any officer, agent, servant or member of the society or any other person to produce any book or document relating to any cash or securities belonging to the society.

PART V

RECONSTRUCTION OF SOCIETIES

52. (1) Reconstruction of a society may be effected in any of the following ways, that is to say, a society may:

(a) amalgamate with other societies to form a single society;

(b) transfer its assets and liabilities to another society; or

(c) divide itself into two or more societies.

(2) The procedures to be adopted in any such case are set out in sections 53 to 56.

53. (1) Any two or more societies may, with the approval of the Commissioner by a resolution passed by not less than three-fourths of all the members of each such society present and voting at a special general meeting called for the purpose amalgamate as one society.

(2) On the passing of the resolution referred to in subsection (1) each such society shall apply to the Commissioner for cancellation of its registration and together make application for the registration of the amalgamated society.

(3) Registration of the amalgamated society shall be a sufficient conveyance to vest the assets and liabilities of the amalgamating societies in the amalgamated society.

54. (1) Any society may, with the approval of the Commissioner, by resolution passed by not less than three-fourths of all the members present and voting at a special general meeting called for the purpose, agree to transfer its assets and liabilities to any other society which has agreed to accept them. Acceptance of that other society shall be evidenced by a resolution of not less than three-fourths of the members of that other society present and voting at a special general meeting called for the purpose.

Reconstruction of societies.

[7 of 1972].

Amalgamation of societies.

Transfer of societies.

(2) On the passing of the resolutions referred to in subsection (1) the transferor society shall apply to the Commissioner for cancellation of its registration and the transferee society shall submit to the Commissioner a copy of its resolution agreeing to the transfer. Cancellation of registration and the submission of the resolution agreeing to accept the transfer shall be a sufficient conveyance to vest the assets and liabilities of the transferor in the transferee.

55. Notwithstanding sections 53 and 54, no amalgamation or transfer shall be effected unless the creditors of the societies concerned are given three months written notice of the proposals and where any such creditor objects in writing to the proposal his claims against the society are first satisfied.

56. (1) Any society may, with the approval of the Commissioner, by a resolution passed by three-fourths of the members present and voting at a special general meeting called for the purpose, resolve to divide itself into two or more societies. The resolution (hereinafter in this section referred to as a "preliminary resolution") shall contain proposals for the division of the assets and liabilities of the society among the new societies into which it is proposed to divide the society and may specify the area of operation of, and the members who will constitute, each of the new societies.

(2) A copy of the preliminary resolution shall be sent to all the members and creditors of the society. A notice of the resolution shall also be given to all other persons whose interests may be affected by the division of the society.

(3) Any member of the society may, notwithstanding any bye-law to the contrary, by notice given to the society within a period of three months from his receipt of the preliminary resolution, intimate his intention not to become a member of any of the new societies.

(4) Any creditor of the society may, notwithstanding any agreement to the contrary, by notice given to the society within a period of three months from his receipt of the preliminary resolution, intimate his intention to demand the payment of moneys due to him. Claims of objecting creditor to be satisfied.

Division of societies.

(5) Any other person whose interest may be affected by the division may by notice given to the society object to the division unless his claim is satisfied.

(6) After the expiry of three months from the receipt of the preliminary resolution by all the members and creditors of the society and of the notice to other persons given under subsection (2), another special general meeting of the society, of which at least fifteen clear days' notice shall be given to its members, shall be convened for considering the preliminary resolution. If, at such meeting the preliminary resolution is confirmed by a resolution passed by not less than two-thirds of the members present and voting either

without changes or with such changes as in the opinion of the Commissioner are not material, the Commissioner may, subject to the provisions of subsection (9) and section 17, register the new societies. On such registration, the original society shall be deemed to be dissolved and its registration cancelled.

(7) The decision of the Commissioner as to whether or not any changes made in the preliminary resolution are material shall be final and no appeal shall lie therefrom.

(8) At the special general meeting referred to in subsection (6) provision shall be made by another resolution for—

(a) repayment of the share capital of all the members who have given notice under subsection (3);

(b) satisfaction of the claims of all the creditors who have given notice under subsection (4);

(c) satisfaction of the claims of such of the other persons who have given notice under subsection (5) as the Commissioner decides, or securing their claims in such manner as the Commissioner directs, save that no member or creditor or other person shall be entitled to such repayment or satisfaction until the preliminary resolution is confirmed as provided in subsection (6).

(9) If within such time from the confirmation of the preliminary resolution as the Commissioner considers reasonable subsection (8) is not complied with, the Commissioner may refuse to register the new societies.

57. The registration of new societies established pursuant to section 56 shall be a sufficient conveyance to vest the assets and liabilities of the original society in the new societies in the manner specified in the preliminary resolution as confirmed under subsection (6) of that section.

PART VI WINDING UP

58. If the Commissioner, after an inquiry has been held under section 4, is of the opinion that the society ought to be wound up, he may make an order directing it to be wound up and may appoint a liquidator for the purpose and fix his remuneration which shall be paid out of the funds of the society. Where no liquidator is appointed the assets and liabilities of the society shall vest in the Commissioner.

59. Where it is a condition of the registration of a society that it shall consist of at least twelve members who are above the age of twenty-one years, the Commissioner may by order in writing direct the society to be wound up, if at any time it is proved to his satisfaction that the membership has been reduced to less than twelve such members.

60. (1) Where, pursuant to section 18(4) the Commissioner issues a winding up order, the assets and liabilities of the society winding up order shall forthwith vest in him and he shall have in respect of those assets and liabilities the powers of a liquidator under section 61.

(2) The Commissioner may by notice published in the *Gazette* delegate his power as a liquidator to an officer of his department.

(3) Any delegation under subsection (2) shall be revocable at will and shall not preclude the Commissioner from exercising the power.

(4) In the exercise of his power as a liquidator, the Commissioner or the officer delegated by him pursuant to subsection (2) shall adopt the procedure specified in regulation 56(b) to (f) of the Co-operative Societies Regulations except that the provisions of regulation 56(c) thereof shall not

apply where the Commissioner exercises the power personally.

Effect of registration of new societies.

[7 of 1972].

Winding up.

Society may be wound up if membership is reduced.

Power of Commissioner on issuing a winding up order.

[24 of 1976].

225/1971.

61. A liquidator appointed under section 58 shall have power to do all or any of the following things:

(a) to take immediate possession of all assets belonging to the society and of all books, records and other documents relating to the business thereof, to carry on the business of the society so far as may be necessary for its winding up and to raise on the security of the assets of the society the money requisite for this purpose;

(b) to have disputes referred to the Commissioner with recommendations that the disputes be settled by arbitration under section 67 and to institute and defend actions and other legal proceedings on behalf of the society in the name of his office;

(c) to investigate all claims against the society and, subject to the provisions of this Act, to decide questions of priority arising out of such claims, and to pay rateably according to the amount of such debts, the surplus if any being applied in payment of interest from the date of liquidation

at a rate to be fixed by the Commissioner and not exceeding the contract rate;

(d) to fix the time within which creditors shall prove their debts and claims or be included for the benefit of any distribution made before those debts or claims are proved;

(e) make any compromise or arrangement with creditors or persons claiming to be creditors or having or alleging to have any claim, present or future, for which the society may be rendered liable;

(f) compromise all calls or liabilities to calls and debts and liabilities capable of resulting in debts, and all claims, present or future, certain or contingent, subsisting or supposed to subsist between the society and a contributory or alleged contributory or other debtor or person Powers of a liquidator.

apprehending liability to the society, and all questions in any way relating to or affecting the assets or the winding up of the society on such terms as may be agreed and take any security for the discharge of any such call, liability, debt or claim and give a complete discharge in respect thereof;

(g) from time to time to determine the contribution to be made or remaining to be made by the members or past members or by the estates or

nominees or legal personal representatives of deceased members or by any officer, to the assets of the society, such contribution shall include debts due from such members or persons;

(h) to determine by what persons and in what proportions the cost of the liquidation shall be borne;

(i) to arrange for the distribution of the assets of the society in a convenient manner when a scheme of distribution has been approved by the Commissioner.

62. When the affairs of a society for which a liquidator has been appointed under section 58 have been wound up, or where no liquidator has been appointed after two months from the date of an order under section 59 or after confirmation of such order on appeal, the

Commissioner shall make an order cancelling the registration of the society, and the society shall be deemed to be dissolved from the date of such order.

63. Save in so far as is expressly provided in this Act, no Court shall take cognisance of any matter connected with the reconstruction within the meaning of Part V, winding up or dissolution of a society under this Act, and when a society has been reconstructed or a winding up order has been made no action or other legal proceeding shall lie or be proceeded with against the society except by leave of the Commissioner and subject to such terms as he may impose.

Effect of cancellation of registration.

Bar of action in reconstruction, winding up and dissolution matters.

[7 of 1972].

64. After all the liabilities including the paid-up share capital of a cancelled society have been met, any surplus assets shall not be divided amongst its members but shall be devoted to any object described in the bye-laws of the society, and when no object is so described, to any object of public utility determined by the general meeting of the society and approved by the Commissioner, or such assets, should the members so agree, may be assigned by the Commissioner in whole or in part to either or both of the following:

(a) an object of public utility of local interest;

(b) a charitable purpose, or may be placed on deposit with a bank approved by the Commissioner until such time as a society with similar objects and bye-laws is registered when with the consent of the Commissioner such surplus assets may be credited to the reserve fund of such new society.

65. (1) Where, in the course of the winding up of a society, it appears that any person who has taken part in the organisation or management of such society or any past or present officer of such society has misapplied or retained or become liable or accountable for any money or property of such society or has been guilty of misfeasance or breach of trust in relation to such society the Commissioner may, on the application of the liquidator or of any creditor or contributory, inquire into the conduct of such person and make an order requiring him to repay or restore the money or property or any part thereof with interest at such rate as the Commissioner thinks just or to contribute such sum to the assets of such society by way of compensation in regard to the misapplication, retainer, dishonesty or breach of trust as the

Commissioner thinks just.

(2) This section shall apply notwithstanding that the Act is one for which the offender may be criminally liable.

66. Where the Commissioner is satisfied that any person with intent to defraud or delay the execution of any order that may be made under section 59 or section 65 or any decision that may be given in a dispute referred to the Commissioner or to any arbitrators is about to dispose of the whole or any part of his property, the Disposal of surplus assets.

Power of Commissioner to surcharge officers, etc., of registered society.

Attachment of property.

Commissioner may, unless adequate security is furnished, apply to the Magistrate of the district in which the property is situate for an Order for the conditional attachment of such property and the Magistrate may where he considers it to be in the interest of justice, make such an Order.

PART VII DISPUTES

67. (1) If any dispute touching the business of a society arises—

- (a) among members, past members and persons claiming through members, past members and deceased members;
- (b) between a member, past member, or person claiming through a member, past member or deceased member, and the society, its board, or any officer of the society;
- (c) between a member and the society arising out of or under any bye-law or bye-laws relating to the disposal of the produce of agriculture or animal husbandry, or under any contract, made under section 27;
- (d) between the society or its board and any officer of the society;
- (e) between the society and any other society; or
- (f) between the society and any of its creditors, the dispute shall be referred to the Commissioner for decision.

(2) The Commissioner may, before proceeding to hear or determine a dispute, make or cause to be made a preliminary investigation into the dispute with the object of ascertaining the facts, defining the issues and endeavouring to bring about a voluntary settlement between the parties to the dispute.

(3) The Commissioner may, on a dispute being referred to him under subsection (1)—

- (a) decide the dispute himself; or
- (b) with the consent of the parties refer the dispute to arbitration.

Settlement of disputes.

(4) The settlement of any dispute by an arbitration award shall be final and shall not be called in question in any Court of law.

(5) For the purpose of hearing and determining any dispute the Commissioner, or the arbitrator as the case may be, may administer oaths, and may require the attendance of all parties concerned and witnesses, and the production of all books, documents and things relating to the dispute.

(6) The Commissioner, or the arbitrator as the case may be, shall also have power to order the expenses of determining any dispute including fees to legal practitioners to be paid either out of the funds of the society or by such parties to the dispute as he in his absolute discretion may think fit.

(7) The decision given in respect of every dispute under this section shall be recorded in the prescribed form or as near thereto as the circumstances of the case may require and a copy thereof shall be issued to every party to the dispute.

(8) Every order made by the Commissioner and any arbitration award shall be executed by any civil Court in the same manner as a decree or order of such Court.

(9) In this section “dispute” includes a claim by a society for any debt or demand due to it from a member, past member or the nominee, heir or legal personal representative of a deceased member.

68. (1) Notwithstanding anything contained in section 67, the Commissioner at any time when proceeding to a decision under this Act or the Minister when an appeal has been referred to him against any decision of the Commissioner under this Act may refer any question of law arising out of such decision for the opinion of the High Court.

(2) Any Judge of the High Court may consider and determine any question of law so referred and the opinion given on such question shall be final and conclusive.

Case stated on question of law.

PART VIII OFFENCES

69. (1) Any member, agent or employee of a society who corruptly accepts, agrees to accept, obtains or attempts to obtain whether for himself or another, any gift or consideration as an inducement or reward for doing or forbearing to do any act relating to the business of the society or for showing favour or disfavour to any person in relation to the business of the society and any person who corruptly gives, agrees to give, or offers such gift or consideration to any such member, agent or employee of a society as such inducement or reward, is liable on summary conviction to a fine of four thousand dollars and to imprisonment for two years and on conviction on indictment to imprisonment for five years.

(2) In this section "consideration" includes valuable consideration of any kind.

70. (1) Any person who obtains possession of any property of or is granted any loan by a society by false representation or other corrupt means or wrongfully withholds or misapplies any such property or loan or wilfully applies any part thereof to purposes other than those directed or expressed in the bye-laws of such society or authorised in this Act or the Regulations, is liable on summary conviction to a fine of two thousand dollars and to imprisonment for one year and on conviction on indictment to a fine or imprisonment for five years.

(2) In any proceedings under this section the person accused may, in addition to any penalty imposed, be ordered to deliver up any property or repay any sum of money to which the proceedings relate and pay the cost of the proceedings.

71. (1) A society or any officer or member thereof or any other person who fails without reasonable cause or wilfully neglects or refuses to comply with any requirement of this Act or the Regulations or to furnish any information or who purporting to comply with any such requirement knowingly furnishes false information is guilty of an offence.

Corrupt practice and bribery.

Falsely obtaining, withholding, or misapplying property of society.

Offences.

(2) Any person who wilfully or without reasonable cause disobeys any summons, order or direction lawfully issued under this Act or the Regulations is guilty of an offence.

(3) Any officer or member of a society who wilfully contravenes the bye-laws of the society relating to his duties or functions as such officer or member is guilty of an offence.

72. (1) Any person who fraudulently or clandestinely removes any property comprised in a charge created in favour of a society under section 29 from the place where such property was situate at the time of the execution of the charge or who knowingly disposes of or deals with or attempts to dispose of

or deal with such property without first obtaining in writing leave of the society on summary conviction is liable to a fine of two thousand dollars and to imprisonment for one year.

(2) Where any person who has received a loan from a society is convicted of an offence under this section there may be imposed on him notwithstanding any penalty specified in subsection (1) an additional penalty equal to such amount of the loan with interest as has not been repaid to the date of the conviction and the payment of such additional penalty shall discharge the

liability of the borrower to repay the loan.

(3) Where the Court has imposed an additional penalty specified in subsection (2) and such penalty is not paid the Court may order that the person convicted under this section and who has defaulted in the payment of the additional penalty be imprisoned for six months in respect of such default.

73. Every society and every officer or member thereof or other person guilty of an offence under this Act for which no penalty is expressly provided is liable on summary conviction to a fine of two thousand dollars and in the case of a continuing offence to a further fine of one hundred dollars for each day that the offence continues after conviction thereof.

Dealing with property subject to a charge.

Penalty for offences not otherwise provided for.

PART IX MISCELLANEOUS

74. A party aggrieved or adversely affected by any order or decision of the Commissioner under this Act may appeal therefrom to the Minister within two months of such order or decision, and a further appeal may lie therefrom to a Judge in Chambers within one month of such order or decision of the Minister.

75. The Commissioner may by instrument in writing delegate to any person any of his powers, except this power of delegation, and any power so delegated shall be exercised in the manner and to the extent specified in the instrument of delegation.

76. (1) No stamp duty, registration fee nor Court fee shall be payable on any instrument executed in pursuance of this Act or the Regulations.

(2) No fee shall be payable for the certification by the Commissioner or the Registrar General of any form of agreement under this Act.

77. The Companies Act does not apply to any society not within the meaning of this Act.

78. This Act does not apply to the Trinidad Co-operative Bank Limited.

79. (1) Every society registered or deemed to have been registered under any of the *Ordinances hereby repealed and whose registration subsists at the date of the commencement of this Act shall be deemed to have been registered under this Act and the bye-laws or rules of such society shall, so far as they are not inconsistent with this Act, continue in force until altered, substituted or revoked by bye-laws made under this Act, so however, that societies registered under the repealed Agricultural Credit Societies Ordinance 1954 shall be deemed to have been registered with unlimited liability.

Appeals.

Delegation of powers.

No stamp duty, etc., payable on instrument.

[7 of 1972].

Provisions of Companies Act not to apply.

Ch. 81:01.

Act not to apply to Trinidad Co-operative Bank.

Saving for existing

societies, bye-laws, etc.

[7 of 1972].

6 of 1954.

* Former section 79 of this Act (omitted) repealed the Credit Union Societies Ordinance, Ch. 38 No. 4; the Co-operatives Societies Ordinance, Ch. 38 No. 5; the Agricultural Credit Societies Ordinance 1954 (6 of 1954).

(2) Sections 86 to 101 of the Credit Union Societies Ordinance and the Trinidad and Tobago Credit Union Bank Rules 1952 shall be deemed to be the bye-laws of the Trinidad and Tobago Credit Union Bank until altered, substituted or revoked by bye-laws made under this Act.

(3) The Memorandum of Association of the Credit Union League of Trinidad and Tobago filed in the office of the Commissioner shall be deemed to be the bye-laws of the Credit Union League of Trinidad and Tobago until altered, substituted or revoked by bye-laws made under this Act.

(4) All regulations and rules made under any of the Ordinances hereby repealed and in force at the time of the commencement of this Act shall, in so far as they are not inconsistent with this Act, be deemed to have been made under this Act and shall continue in force until altered, substituted or revoked by regulations made under this Act.

(5) All appointments and orders made, notifications and notices issued, and suits or other proceedings instituted or deemed to have been made, issued or instituted under any of the Ordinances hereby repealed, shall, so far as may be, be deemed to have been respectively made, issued and instituted under this Act.

(6) Where in any law reference is made to a credit union or to a co-operative society or to an agricultural credit society registered under any of the Ordinances hereby repealed the reference shall be deemed to apply to a society registered or deemed to be registered under this Act.

80. The Minister may, by Order, exempt any society or class of societies from any of the provisions of this Act, or may direct that this Act shall apply to such society or class of societies with such modifications as may be specified in the Order; save that no order to the prejudice of any society shall be made without an opportunity being given to such society to represent its case.

Ch. 38 No. 4.

(1950 Ed.).

Power to exempt societies from provisions of Act.

[7 of 1972].

81. The Minister may make Regulations to carry out the purposes of this Act and in particular such Regulations may—

(a) prescribe all things required by this Act to be prescribed;

(b) provide for the constitution and management of societies, specifying the rights and obligations of members;

(c) provide for general meetings of the members and for the procedure at such meetings and the powers to be exercised by such meetings;

(d) prescribe the returns to be submitted by a society to the Commissioner, the persons by whom and the form in which such returns shall be submitted;

(e) set out the procedure for the certification of copies of documents or entries in the books of societies and fix the charges to be levied for such copies;

(f) provide for the writing off of bad debts;

(g) prescribe the manner in which any question as to the breach of any bye-laws or contract relating to the disposal of produce to or through a society

may be determined, and the manner in which liquidated damages for any such breach may be ascertained or assessed;

(h) provide for the procedure to be followed by a liquidator appointed under section 58 or by the Commissioner under section 4;

(i) provide for the appointment of arbitrators and the procedure to be followed in proceedings before them;

(j) prescribe the procedure to be followed in presenting and disposing of appeals; and

(k) specify the conditions and the rates of payment of contributions by societies to any pension fund which they may establish for the benefit of their servants and employees.

Regulations.

SUBSIDIARY LEGISLATION

JUNIOR CO-OPERATIVE SOCIETIES

(REGISTRATION FEE EXEMPTION) ORDER

made under section 80

1. This Order may be cited as the Junior Co-operative Societies (Registration Fee Exemption) Order.

2. All Junior Co-operative Societies which satisfy the registration requirements of section 16(1)(d) of the Act shall be exempted from the further requirement of having to pay the registration fee provided for by section 16(3) of the Act.

77/1974.

Citation.

Exemption from registration fee.

[Subsidiary]

CO-OPERATIVE SOCIETIES REGULATIONS

ARRANGEMENT OF REGULATIONS

REGULATION

1. Citation.

2. Register of Societies.

3. Application for registration.

4. Documents to be supplied to a society.

5. Refusal to register a society.

6. Register of members.

7. Books, accounts and forms.

8. Membership.

9. Withdrawal from society.

10. Disqualification for membership.

11. Number of members.

12. Appointment of nominees.

13. Division of surplus.

14. Limit to liability.

15. Authority of general meeting.

16. Right of member to attend general meetings.

17. First meeting of members.

18. Convening of annual general meeting.

19. Convening of special general meeting.

20. Chairman of meetings.

21. Voting at meetings.

22. Voting of resolution by show of hands.

23. Minutes of meetings.
24. Election of Board.
25. Powers and duties of the Board.
26. Meetings of the Board.
27. Failure to attend Board meeting.
28. Vacancy on Board.
29. Borrowing powers of Board.
30. Appointment of officers.
- Co-operative Societies Chap. 81:03 41*
- Co-operative Societies Regulations [Subsidiary]*
31. Security for financial officers.
32. Bad debts.
33. Preparation of balance sheet.
34. Loan to be approved by Board or committee.
35. Application for loan.
36. Approval of loan.
37. Granting of loans.
38. Purpose of loans.
39. Notification of approval to borrower.
40. Instruments to be executed.
41. Inspection of Register Book of Co-operative Societies' Charges.
42. Restriction on loans to defaulters.
43. Extension of time on loans.
44. Misapplication of loan.
45. Recovery of loans.
46. Transfer of shares.
47. Reserve fund.
48. Audit of accounts.
49. Supervisory and Audit Fund.
50. Bye-laws.
51. Amendments to bye-laws.
52. Copies of entries.
53. Reference of dispute to Commissioner.
54. Reference to arbitration by Commissioner.
55. Proceedings before arbitrators.
56. Procedure on liquidation.
57. Liquidator to forward records to Commissioner.

FIRST SCHEDULE.

SECOND SCHEDULE.

REGULATION

42 Chap. 81:03 *Co-operative Societies*

[Subsidiary]

CO-OPERATIVE SOCIETIES REGULATIONS

made under section 81

1. These Regulations may be cited as the Co-operative Societies Regulations.
2. (1) The Commissioner shall keep or cause to be kept at his office a register to be called "The Register of Societies" wherein he shall register societies in accordance with section 17 of the Act and enter particulars relating to such societies and their bye-laws.

(2) All entries in the Register of Societies shall be made by, or under the direction of the Commissioner and shall be signed by him.

(3) Every alteration, interlineation or erasure in the Register of Societies shall be initialled by the Commissioner.

(4) The Register of Societies shall be open to inspection by the public at all reasonable times.

3. Every application for the registration of a society shall be made to the Commissioner on the form set out as Form 1 in the Second Schedule and shall be accompanied by the fee specified in the First Schedule.

4. Upon the registration of a society, the Commissioner shall forward to the society, free of charge—

(a) a certificate of registration;

(b) a copy of the bye-laws of the society as approved by him and certified under his hand as having been approved by him;

(c) a copy of the Act and of these Regulations.

5. Where the Commissioner refuses to register a society or to approve its bye-laws he shall furnish the society with his reasons therefor.

255/1971.

[201/1997].

Citation.

Register of Societies.

Application for registration.

Form 1.

Second Schedule.

First Schedule.

Documents to be supplied to a society.

Refusal to register a society.

6. Every society shall keep a register to be called "The Register of Members" in which shall be entered—

(a) the name, address and occupation of each member and the number of shares held by him;

(b) the date on which the name of each member was entered therein;

(c) the date on which a member ceased to be a member;

(d) the name and address of every nominee appointed under regulation 12; and

(e) the number of shares transferred to each nominee.

7. Every society shall keep such account and shall use such books and forms as may from time to time be approved by the Commissioner.

8. The admission of persons as members of a society other than original members shall be in such manner and on such conditions as prescribed by the bye-laws.

9. A member may withdraw from a society by giving written notice to the Secretary but the withdrawal shall be without prejudice to section 42 of the Act.

10. Where a member ceases to qualify for membership in a society, under the Act or these Regulations or the bye-laws, the board shall cause his name to be struck off the Register of Members, but the striking-off of the name shall be without prejudice to any liability of the person under section 42 of the Act.

11. No society shall fix a limit to the number of its members without the approval of the Commissioner.

12. (1) Every appointment of a nominee by a member of a society shall be made in writing and signed by the member in the presence of two attesting witnesses.

(2) A member of a society with a share capital is not entitled to appoint more than one nominee in respect of each share he holds.

(3) In every case where more than one nominee is appointed by a member the number of shares or the exact proportion of the shares to be transferred to each nominee shall be specified at the time of the appointment.

(4) For the purpose of a transfer to a nominee, the value of any share or interest shall be represented by the sum paid for that share or interest by the member holding it.

(5) Where any money is paid to a nominee who is an infant, a receipt given by the infant or by his parent or guardian as the case may be, shall be a good and sufficient discharge of the liability of the society in respect of that money.

13. (1) No dividend or payment on account of surplus shall be made by a society with unlimited liability until the reserve fund has reached a proportion of not less than one-tenth of the total liabilities of the society.

(2) *(Revoked by LN 201/1997).*

(3) At the end of a financial year, a bonus based on wages or on the value of the products of a member, or a bonus or rebate on patronage calculated in proportion to the amount of the business done by each member with the society may be distributed among its members from any balance of the surplus of the society, after making the prescribed provision for the reserve fund, and from any available surplus of past years.

(4) A bonus or rebate may be paid to the members before the end of a financial year only where the Commissioner so authorises.

14. (1) Every society shall, from time to time, fix at a general meeting the maximum liability it may incur in respect of loans or deposits whether from members or non-members.

Division of surplus.

[201/1997].

(2) The maximum liability fixed under subregulation (1) shall be subject to the approval of the Commissioner, who may at any time reduce it.

(3) No society shall receive loans or deposits in excess of the maximum liability approved or fixed by the Commissioner.

15. The supreme authority in a society shall be vested in the general meeting of the society.

16. Every member of a society has a right to attend and vote at all general meetings of the society.

17. Every society shall hold its first general meeting within one month of receiving its certificate of registration and the rights and powers exercisable at the meeting shall be the same as those exercisable at an annual general meeting.

18. (1) The annual general meeting of a society, of which at least seven days' notice shall be given to the members, shall be convened by the Board not later than one month after the report on the audit of the accounts of the society is received by the Board.

(2) Notwithstanding subregulation (1) the Commissioner may, if he thinks fit, at any time after the audit of the accounts has been completed convene the annual general meeting and the meeting shall proceed as if it had been convened by the Board.

19. (1) The Board may convene a special general meeting at any time and shall do so on receipt of a demand for the meeting from the requisite number of members as prescribed by the bye-laws. The demand shall state the object of the meeting and shall be signed by such members.

(2) Notwithstanding subregulation (1) the Commissioner or a person authorised by him in writing may at any time, summon a special general meeting of a society in such manner and at such time and place as the Commissioner or that person may direct.

20. (1) The President of the Board, or in his absence the Vice- President, or in the absence of both, any other person elected by a majority of the members present, shall preside at the annual or special general meeting.

(2) The Commissioner or a person authorised by him in writing shall preside at any meeting convened by the Commissioner or at his demand.

(3) The Chairman may, by a decision of the meeting, adjourn the meeting from time to time and from place to place but no business shall be transacted at any meeting so adjourned other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place.

(4) The Chairman shall have the right to order the closure of a discussion and put the matter to the vote.

21. Any question other than those specified in these Regulations submitted for the decision of the members present at a meeting shall be decided by a majority of votes.

22. (1) A resolution put to the vote at any meeting shall be decided on a show of hands, unless the bye-laws otherwise provide.

(2) In respect of every resolution put to the vote the Chairman shall declare—

(a) whether it has been carried or lost;

(b) whether the voting was by show of hands; and

(c) whether the decision was unanimous or by a particular majority, and in respect of all such declarations, the minutes shall be conclusive evidence thereof.

23. Minutes of the meetings shall be entered in the minute book and shall be signed by the Chairman and the Secretary. The minute book shall contain—

(a) the names of the officers and the number of members present at the meeting;

Chairman of meetings.

(b) the time fixed for the meeting and the time the meeting commenced;

(c) the membership of the society on the date of the meeting; and

(d) the resolutions passed or decisions made at the meeting.

24. The Board shall be elected at the annual general meeting of the society in accordance with the bye-laws of the society.

25. (1) The Board shall represent the society before all competent public authorities and in all dealings and transactions with third persons, and shall carry out such duties in the

management of the affairs of the society as have not been specifically assigned by these Regulations or the bye-laws to general meetings or to an officer.

(2) The Board may institute suits in the name of the society and defend suits brought against the society.

(3) The Board shall keep conspicuously displayed at the registered office of the society—

(a) a copy of the latest annual balance sheet of the society; and

(b) a copy of the latest annual report on the audit of the accounts of the society.

26. The Board shall meet as often as the business of the society may require.

27. A member of the Board who, without its approval, fails to attend three consecutive meetings of the Board shall be deemed to have vacated his office and the office shall thereupon be filled as provided in regulation 28.

28. Whenever a vacancy occurs on the Board, the remaining members of the Board shall, within fourteen days of the occurrence of the vacancy fill the vacancy by appointing a substitute elected at the last annual general meeting in accordance with the bye-laws.

Election of Board.

Powers and duties of the Board.

Meetings of the Board.

Failure to attend Board meeting.

Vacancy on Board.

29. The Board may borrow money on behalf of the society to an amount not exceeding the maximum liability fixed in accordance with regulation 14.

30. (1) The Board shall appoint a Secretary whose duties shall be prescribed by the bye-laws.

(2) The Board may appoint such officers and employees as it considers necessary.

31. An officer or employee whose duties involve the handling of the funds of a society shall give security in such amount as may be determined by the Board and approved by the Commissioner.

32. The Board may, with the approval of the general meeting, cause bad debts to be written off the books of the society.

33. The Board shall in every year within such time as the Commissioner may direct— (a) cause to be prepared and sent to the Commissioner—

(i) the audited balance sheet as at the end of the preceding financial year;

(ii) a detailed statement of the profit and loss account for the preceding financial year;

(iii) a statement of the receipts and payments for the preceding financial year; and

(iv) a statement containing the name and address of every member in default and the amount he is owing as at the end of the financial year; (b) prepare and send to the Commissioner such statistical information as he may require; (c) prepare a report on the work of the society during the preceding financial year for presentation to the annual general meeting.

Borrowing powers of Board.

Appointment of officers.

Security for financial officers.

Bad debts.
Preparation of balance sheet.

34. In the case of a society whose primary object is the granting of loans to its members and in which name the words "Credit Union" appear, loans shall be approved by the credit committee (hereinafter called "the committee"). In all other cases loans shall be approved by the Board.

35. Every member who desires to obtain a loan from his society shall submit an application to the Board or committee, as the case may be, which shall state—

- (a) the amount of money required;
- (b) the purpose for which it is required;
- (c) the period for which it is required;
- (d) whether it is desired to repay the loan by instalments; and
- (e) the nature of any security that is offered or the names, addresses and occupations of the proposed sureties.

36. (1) The Board or the committee, as the case may be, shall consider at a meeting every application for a loan and if it is satisfied with the trustworthiness of the applicant, the sufficiency of any security offered (if required) and the prospects of advantage to the borrower in the way of increased production or economy or otherwise, it may approve the loan.

(2) The only persons who may be present at a meeting of the Board or committee when an application for a loan is being considered are the members of the Board or the committee, as the case may be, the Secretary and the Commissioner and his staff.

(3) A member of the Board or committee who applies for a loan or who is proposed as a surety for a loan must withdraw while the relevant application is being considered.

(4) If there is a difference of opinion concerning the granting of a loan, the voting shall be taken by ballot.

(5) The proceedings at a Board or committee meeting with regard to loans shall be kept secret, and where this provision is infringed—

- (a) by a member of the Board or committee, that member is liable to expulsion from the Board or committee, as the case may be; and
- (b) by an officer of the society, that officer is liable to dismissal from office.

37. Loans, when approved, shall be granted to members in accordance with regulation 40.

38. (1) No loan shall be made without the approval of the Board or committee, as the case may be.

(2) A loan shall be applied only to such purpose for which it was granted.

39. When a loan is approved by the Board or committee a notice to that effect shall be sent to the borrower.

40. Where a loan is made the borrower and his sureties, if any, shall execute an instrument in writing containing the terms of repayment of the loan and such other terms and conditions as the Board or committee may consider necessary, but if he is required to provide security for the loan he shall execute an instrument of charge in the form set out as Form 2 in the Second Schedule.

41. Any person may, on payment of the fee specified in the First Schedule, inspect the Register Book of Co-operative Societies' Charges and take extracts therefrom.

42. Where a member—

(a) is in default in the repayment of a loan or the payment of an instalment in respect of a loan; and

(b) does not satisfy the Board or committee that his default is due to a good cause, that member shall not be granted a further loan until he has repaid the existing loan.

43. Where, owing to sickness or some other cause, a member finds that he will be unable to discharge his obligations to the society in respect of any loan made to him and notifies the Secretary in writing before the time fixed for repayment of the loan or the payment of any instalment, the Board or committee, as the case may be, may extend the time fixed for repayment of the loan or payment of the instalment, as the case may be, on such conditions as it thinks fit.

44. Where the Board or committee is satisfied that a member of the society who has obtained a loan has applied the loan or any part thereof to a purpose other than the purpose for which it was granted, the Board or the committee, as the case may be, may by notice in writing to the member demand repayment of the loan before the agreed date of repayment.

45. Where—

(a) on the due date a loan has not been repaid or any instalment in respect of a loan has not been paid; and

(b) no extension of time for the repayment of the loan or the payment of the instalment, as the case may be, has been sought or given under regulation 43, the Board or committee, as the case may be, may take steps for the recovery of the loan or instalment by referring the matter to the Commissioner as prescribed in section 67 of the Act.

46. (1) Any share may be transferred with the approval of the Board to any other member at the option of the transferor, but if the transferee is not a member, he must be approved as a member by the Board, or the general meeting in accordance with the bye-laws relating to the admission of members, before the transfer can be registered; and if the bye-laws require a member to hold more than one share the transferee must acquire by the transfer, or by the transfer and allotment, the number of shares required to be held before the transfer can be registered.

(2) An application to transfer shares shall be in such form as approved by the Commissioner.

(3) No transfer of a share shall be valid and effective unless and until the transfer has been registered by the Secretary on the direction of the Board.

(4) No transfer of a share shall be registered if made by a member indebted to the society without special order of the Board, and until the transfer of a share is registered no right shall be acquired against the society by the transferee, nor shall any claim of the society against the transferor be affected thereby.

47. The reserve fund of a society, established under section 47 of the Act, may with the approval of the Commissioner be applied to meet bad debts or losses sustained through extraordinary circumstances over which the society has no control.

48. (1) The accounts of every society shall be audited within two months of the end of the financial year by the Commissioner or a person authorised by the Commissioner.

(2) Where a person is authorised by the Commissioner to audit the accounts of a society that person shall, in addition to complying with the requirements of section 51(3) of the Act, examine the annual statement of receipts and expenditure, the profit and loss account and the balance sheet and verify them with the accounts and vouchers relating thereto and if they are found to be correct and in accordance with the Act and these Regulations he shall so certify at the foot of the balance sheet, but if they are found to be otherwise he shall report to the Commissioner the respects in which he finds any of them incorrect or not in accordance with the Act or these Regulations and the Commissioner shall forward the report to the Board together with such comments as he considers necessary.

49. (1) There shall be constituted a fund to be called "The Supervisory and Audit Fund", (hereinafter called "the Fund") and every society, the accounts of which have been audited by Reserve fund the Commissioner or a person authorised by him shall when called upon to do so by the Commissioner, make annually a contribution to the Fund.

(2) Until such time as a society for supervision and audit has been established and registered—

(a) the Fund shall be held by the Commissioner and administered by him on behalf of the contributing societies;

(b) the Commissioner shall fix the amount of the annual contribution to the Fund. The amount shall be subject to a maximum of either ten per cent of the net annual surplus of the society or one per cent of the working capital of the society whichever is less but shall not in any case be less than ten dollars.

(3) So long as the Commissioner administers the Fund he shall furnish the Minister with an annual report showing the income derived from contributions, the expenditure he has sanctioned from the Fund and the balance in hand.

(4) As soon as a society for supervision and audit has been established and registered, the Fund shall be credited to the society and shall be utilised by the society in accordance with its objects and bye-laws.

50. (1) The bye-laws of a society shall contain provisions in respect of the following matters:

(a) the name of the society;

(b) the registered address of the society and its area of operations;

(c) the objects for which the society was established;

(d) the purposes to which the funds may be applied;

(e) the qualifications for membership and the terms of admission to membership;

(f) the manner and terms of withdrawal from the society;

Bye-laws.

[201/1997].

(g) the grounds and manner of expulsion of a member from the society;

(h) the nature and extent of the liability of members;

(i) the manner of raising funds, including the maximum rate of interest on deposits;

(j) the procedure at general meetings and at meetings of the Board, and the manner of convening the meetings;

(k) the number of members to constitute a quorum;

(l) the composition of the Board and the mode of election thereto;

(m) the duties of the officers and the manager;

(n) the manner of the investment of the funds of the society; and

(o) the financial year of the society.

(2) If the objects of a society include the creation of funds to be lent to its members, the bye-laws shall contain, in addition to the matters specified in subregulation (1) provisions in respect of the following matters:

(a) the conditions on which loans may be made to members including the rate of interest, and the manner of recovery; and

(b) the consequence, if any, of default in payment of any sum due on account of shares.

(3) A society whose primary object is the granting of loans to its members and in which name the words "Credit Union" appear, shall provide in its bye-laws that—

(a) the liability of the members for the debts of the society shall be limited by shares;

(b) a member may withdraw any portion of his share capital not otherwise pledged to the society on demand except that the Board may require notice for a period not exceeding six months;

(c) in addition to the Board, two committees shall be elected annually by the members, namely—

(i) a credit committee for the granting of loans to members; and

(ii) a supervisory committee for purposes of supervision;

(d) a member of the supervisory committee shall not be eligible for membership to the Board or to the credit committee;

(e) deposits may be received from members only.

(f) *(Deleted by LN 201/1997).*

(4) Subregulation (3) does not apply to a society whose object is to assist or foster Credit Unions and whose membership is composed entirely of Credit Unions.

51. (1) A resolution to amend the bye-laws of a society in accordance with section 21 of the Act shall not be valid unless it was passed by a majority of not less than three-fourths of the members present at the general meeting at which the resolution was proposed.

(2) If a resolution referred to in subregulation (1) is not passed by the required majority the same resolution may unaltered be proposed at another general meeting convened for the purpose, not earlier than one month nor later than two months after the general meeting at which it was first proposed and if it is then passed by a majority of members the resolution shall be valid for the purposes of section 21 of the Act.

(3) A copy of every resolution passed under subregulations (1) and (2) shall be forwarded to the Commissioner together with three copies of the amendment.

52. (1) A copy of an entry in any register, book or other record kept in the course of business of a society may be certified by a certificate affixed at the foot of the copy declaring that it is a true copy of the entry and that the register, book or other record, as the case may be, containing the entry is still in the custody of the society; the certificate being dated and signed by the Secretary and one member of the Board.

(2) Any person may, on payment of the fee specified in the First Schedule, obtain from the Secretary of a society a certified copy of an entry in any register, book or other record kept in the course of business of the society.

53. (1) A dispute may be referred to the Commissioner under section 67(1) of the Act—

(a) by the Board;

(b) by the society in pursuance of a resolution in that behalf taken in general meeting;

(c) by any party to the dispute; or

(d) where the dispute concerns a member of the Board and the society, by any member of the society.

(2) Every dispute shall be referred to the Commissioner by a statement in writing addressed to the Commissioner. The statement shall specify the nature of the dispute, set

out full particulars of the dispute and shall be dated and signed by the party referring the dispute.

54. (1) Where by section 67(3) of the Act, the Commissioner refers a dispute to arbitration, the reference shall be embodied in an order of reference under his hand.

(2) Every order of reference under subregulation (1) shall—

(a) specify the name, surname, place of abode and occupation of the arbitrator or arbitrators;

(b) set out the dispute and full particulars thereof; and

(c) specify the time within which the award shall be forwarded by the arbitrator or arbitrators to the Commissioner.

(3) Notwithstanding subregulation (2)(c), where the Commissioner is satisfied that there is good cause for doing so he may, by a further order, extend the time within which an award shall be forwarded to him.

(4) Where the Commissioner considers it fit to refer a dispute to more than one arbitrator, the reference shall be to three arbitrators of whom one shall be nominated by each party to the dispute and the third shall be nominated by the Commissioner and shall act as Chairman.

(5) Where there is more than one party on any side, the Commissioner shall determine which of them is the principal party and that party is entitled to nominate an arbitrator.

(6) Where a reference is made to three arbitrators, the following provisions shall have effect:

(a) if any party to the dispute fails to nominate an arbitrator within such time as the Commissioner may specify, the Commissioner may make the nomination;

(b) if an arbitrator nominated by one of the parties to the dispute dies, or refuses or neglects to act, or by absence or otherwise becomes incapable of acting, the Commissioner shall call upon the party concerned to nominate a new arbitrator and if a new arbitrator is not nominated within such time

as the Commissioner may specify, the Commissioner may make the nomination;

(c) if an arbitrator nominated by the Commissioner dies, or refuses or neglects to act, or by absence or otherwise becomes incapable of acting, a new arbitrator may be nominated by the Commissioner;

(d) the opinion of the majority of the arbitrators shall prevail.

55. (1) The proceedings before the Commissioner or the arbitrator or arbitrators, as the case may be, shall be conducted as nearly as possible as proceedings before a Court of law and in particular the following shall have effect in respect thereof:

(a) written notice of the time and place at which the proceedings are to be held shall be served upon the parties to the dispute at least ten days before the date of the hearing; Proceedings before arbitrators.

(b) the evidence adduced at the hearing shall be reduced in writing and shall be dated and signed by the Commissioner, or the arbitrator or arbitrators, as the case may be;

(c) every party to a dispute is entitled to appear at the hearing thereof and may be represented by an Attorney-at-law or any person who in the opinion of the Commissioner or arbitrator or arbitrators, as the case may be, is competent to assist such party in the presentation of his case;

(d) documentary exhibits shall be marked, dated and initialled by the Commissioner or arbitrator or arbitrators, as the case may be, and shall be attached to the record of the proceedings;

(e) where a party is duly served and he fails to attend at the hearing, the dispute may be heard and determined *ex parte*.

(2) The decision given in respect of every dispute shall be recorded in the form set out as Form 3 in the Second Schedule and shall be dated and signed by the Commissioner, or arbitrator or arbitrators, as the case may be.

(3) Upon the conclusion of the proceedings the arbitrator or arbitrators shall immediately forward to the Commissioner the record of the proceedings including the notes of evidence, documentary exhibits and the award.

56. Where a liquidator has been appointed under section 58 of the Act the following procedure shall be adopted:

(a) the appointment of the liquidator shall be published by the Commissioner in the *Gazette*;

(b) the liquidator shall at once take charge of the books and property and assets of the society and publish by such means as he may think proper a notice requiring all claims against the society to be notified to him within two months of the publication of the notice. He shall thereafter proceed to take such further action as he is empowered to take under the Act. All liabilities recorded in the account books of a society shall be deemed to have been duly notified to the liquidator;

(c) the liquidator shall make separate orders against the various members and past members of the society, noting the amount to be realised from each as a contribution under section 61 of the Act and the cost of liquidation under the said section. These orders shall be submitted for approval to the Commissioner, who may modify them or refer them back to the liquidator for further inquiry or other action;

(d) if the sum assessed against any member is not recovered, the liquidator may frame a subsidiary order or orders against any other member or members to the extent of the liability of each for the debts of the society, until the whole amount due from members is recovered, and these orders shall be dealt with in the same way as orders under subregulation (c);

(e) the liquidator shall submit a monthly report to the Commissioner in such form as the Commissioner may require;

(f) all funds in charge of the liquidator shall be deposited in a recognised bank, and shall stand in his name as liquidator;

(g) the Commissioner shall fix the amount of the fee, if any, to be paid to the liquidator, which may be by way of commission.

57. Where the affairs of a society for which a liquidator has been appointed have been wound up and an order cancelling the registration is made under section 62 of the Act, the liquidator shall forward all the books and records of the cancelled society, and all his own papers and proceedings to the Commissioner, together with an account of his expenses, showing how the surplus assets, if any, have been disposed of, and attaching the receipt of the person to whom it was handed over.

**Liquidator to forward records to Commissioner.
Regulations 3 and 41.**

SECOND SCHEDULE REPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO

FORM 1
THE CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT
APPLICATION FOR REGISTRATION

To: The Commissioner for Co-operative Development, Port-of-Spain.

1. Application for registration of the undermentioned society under the Co-operative Societies Act is hereby made by the persons whose signatures appear hereunder:

2. The name of the society is

3. The registered address is at

4. The area of operations of the society is

5. The objects of the society are as stated in the bye-laws

6. The bond of membership is

7. The financial year will terminate on the day of in each year.

8. The liability of the members for the debts of the society is limited/unlimited.*

9. The society was established on the day of 20..... and at the date of this application there are members in the society.

10. Herewith enclosed are three copies of the proposed bye-laws.

11. The sum of \$ is enclosed, being registration fee.

*Delete what is not applicable.

Regulations 3,
40 and 55.

13. The full name and address of the Secretary are as follows:

Dated the day of in the year of Our Lord two thousand and

Secretary

FORM 1—Continued

Name

(Please Print) Age Occupation Address Signature

.....12.

Particulars relating to the applicants are given hereunder:

FORM 2
THE CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT
INSTRUMENT OF CHARGE

I
of.....

(hereinafter called "the Borrower"), being owner of the property described in the Schedule hereto, and being a member of the

(hereinafter called "the Society"), in consideration of the sum of

.....
dollars
lent to me this day by the Society, the receipt whereof is hereby acknowledged, I do hereby create a charge on the property described in the Schedule hereto, in favour of the Society as security for the repayment to the Society of the said sum of dollars together with interest thereon at the rate of per cent a year, by instalments of dollars as from the day of, 20.....

Now these presents witness that in consideration of the sum lent to the Borrower as aforesaid the Borrower hereby agrees that the charge hereby created is subject to the following covenants and conditions, that is to say:

(1) That he will repay the principal together with interest thereon on the day of 20.....

(2) That he will not, at any time while any moneys remain owing hereunder, do or allow to be done any act whereby the property may become prejudicially affected.

(3) That he is entitled to retain possession and use of the property unless he makes default—

(a) in the payment of any instalment or of the principal or interest thereon; or

(b) in the observance or performance of any covenant or condition herein expressed in which case the Society may immediately upon such default or at anytime thereafter, through an agent authorised by the Society in that behalf—

(i) seize and take possession of the property or any part thereof; and

Regulation 40.

(ii) sell the property so seized and taken possession of either at auction or by private treaty and in either case the property may be sold separately or together or in lots or for a lump sum payment or for payment by instalments as the Society may deem expedient.

(4) That upon a sale of the property or of any part thereof by the Society the following provisions shall have effect, that is to say:

(a) the proceeds of sale shall be applied in accordance with section 29(2)(c) of the Co-operative Societies Act;

(b) no purchaser of such property shall be bound to inquire as to the propriety or regularity of the sale or shall be affected by any impropriety or irregularity of or at such sale;

(c) the Society shall not be answerable to the Borrower in damages or otherwise for any loss occasioned to the Borrower by the sale or for any act, neglect or default of the Society or of its authorised agent.

THE SCHEDULE

.....
Executed in duplicate at
this day of, 20.....

Signed in our presence by the said who is personally known to us.

.....of the.....

(Add additional sheet if space allotted is too small)

Signature of Borrowing Member

President/Chairman

Secretary

FORM 3**THE CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT DETERMINATION AND ORDER
IN THE MATTER OF A DISPUTE BETWEEN**

.....(Complainant)
AND

.....(Respondent)
referred to me pursuant to section 67 of the Co-operative Societies Act I,
..... Commissioner for Co-
operative Development, do order and determine as follows:

(1)

.....
(2)

.....
(3) The cost and expenses of hearing and determining the dispute are \$

.....
(4) I direct that costs and expenses in the amount of \$ be paid by
.....
to

Given under my hand this day of, 20.....

N.B.—This Form is to be adapted in the case of an award by an arbitrator or arbitrators
under section 67.

Regulation 55.

Commissioner for Co-operative Development

MINISTRY OF LEGAL AFFAIRS www.legalaffairs.gov.tt

UNOFFICIAL VERSION

UPDATED-TO-DECEMBER-31ST-2011

4.35. UNIÓN EUROPEA

- **Reglamento (CE) N° 1435/2003 del Consejo de 22 de julio de 2003 relativo al Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea (SCE)**

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 308,

Vista la propuesta de la Comisión(1),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo(2),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(3),

Considerando lo siguiente:

(1) El Parlamento Europeo ha adoptado varias resoluciones relacionadas con las cooperativas, entre las que cabe mencionar la Resolución de 13 de abril de 1983 sobre el movimiento cooperativo en la Comunidad Europea(4), la de 9 de julio de 1987 sobre la contribución de las cooperativas al desarrollo regional(5), la de 26 de mayo de 1989 sobre el papel de la mujer en las cooperativas e iniciativas locales de creación de empleo(6), la de 11 de febrero de 1994 sobre la contribución de las cooperativas al desarrollo regional(7) y la de 18 de septiembre de 1998 sobre el papel de las cooperativas en el crecimiento del empleo femenino(8).

(2) La realización del mercado interior y la mejora de la situación económica y social que tal realización debe fomentar en el conjunto de la Comunidad implican, además de la eliminación de los obstáculos a los intercambios, una reestructuración a escala de la Comunidad de las estructuras de producción. A tal fin es indispensable que las empresas de todo tipo cuya actividad no se limite a satisfacer necesidades puramente locales puedan concebir y llevar a cabo la reorganización de sus actividades a escala comunitaria.

(3) El marco jurídico aplicable a la actividad económica dentro de la Comunidad sigue basándose en gran medida en las legislaciones nacionales y no se ajusta, pues, al marco económico en que dicha actividad debe desarrollarse para lograr los objetivos enunciados en el artículo 18 del Tratado. Esta situación puede entorpecer de manera considerable las operaciones de agrupamiento entre sociedades sometidas a las legislaciones de los distintos Estados miembros.

(4) El Consejo ha adoptado el Reglamento (CE) n° 2157/2001(9) en el que se establece la forma jurídica de la sociedad anónima europea (SE) con arreglo a los principios generales de la sociedad anónima. Dicho instrumento no se adapta a las características específicas de las cooperativas.

(5) La Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE), establecida en el Reglamento (CEE) n° 2137/85 del Consejo(10), si bien permite a las empresas fomentar determinadas actividades de manera conjunta, a la vez que preserva su autonomía, no satisface las necesidades específicas de las cooperativas.

(6) La Comunidad, en su afán de respetar la igualdad de condiciones de la competencia y de contribuir a su desarrollo económico, debe dotar a las cooperativas, entidades comúnmente reconocidas en todos los Estados miembros, de instrumentos jurídicos adecuados que permitan facilitar el desarrollo de sus actividades transfronterizas. Las Naciones Unidas han instado a todos los Estados a asegurar un entorno propicio en que las cooperativas puedan participar en igualdad de condiciones con otras formas de empresa(11).

(7) Las cooperativas son, ante todo, agrupaciones de personas o entidades jurídicas que se rigen por principios de funcionamiento específicos, distintos de los de otros agentes económicos. Entre esos principios cabe mencionar el de la estructura y gestión democráticas y el de la distribución equitativa del beneficio neto del ejercicio financiero.

(8) Estos principios particulares se refieren especialmente al principio de primacía de la persona, que se refleja en disposiciones específicas relativas a las condiciones de adhesión, renuncia y exclusión de los socios; dicho principio se traduce en la regla un hombre, un voto, que vincula el derecho de voto a la persona e implica la imposibilidad de que los miembros ejerzan un derecho sobre el activo de la sociedad cooperativa.

(9) Las cooperativas tienen un capital social y sus socios pueden ser tanto particulares como empresas. La cooperativa puede estar integrada, en su totalidad o en parte, por clientes, trabajadores o proveedores. Las cooperativas integradas por socios que son a su vez empresas cooperativas se denominan cooperativas secundarias o de segundo grado. En algunos casos, las cooperativas también pueden contar entre sus miembros con un porcentaje determinado de socios inversores no usuarios o de terceros que se benefician de su actividad o realizan trabajos por cuenta de la cooperativa.

(10) El objetivo principal de la sociedad cooperativa europea (denominada en lo sucesivo SCE) debe ser la satisfacción de las necesidades de sus socios o el desarrollo de sus actividades económicas o sociales, respetando los principios siguientes:

- sus actividades han de tener por objeto el beneficio mutuo de los socios de modo que todos ellos se beneficien de las actividades de la SCE en función de su participación,
- sus socios han de ser, además, clientes, trabajadores o proveedores o estar implicados de alguna forma en las actividades de la SCE,

- el control debe estar repartido equitativamente entre sus socios, aunque puede admitirse la ponderación de votos para reflejar la aportación de cada socio a la SCE,
- la remuneración del capital tomado en préstamo y de las participaciones debe ser limitada,
- los beneficios han de distribuirse en función de las actividades realizadas con la SCE o utilizarse para satisfacer las necesidades de sus socios,
- no deben existir obstáculos artificiales a la adhesión,
- el activo neto y las reservas se adjudicarán, en caso de disolución, con arreglo al principio de adjudicación desinteresada, es decir, a otra entidad cooperativa que persiga objetivos similares o fines de interés general.

(11) La cooperación transfronteriza entre cooperativas tropieza actualmente en la Comunidad con dificultades de orden jurídico y administrativo que conviene eliminar en un mercado sin fronteras.

(12) La creación de una forma jurídica de alcance europeo para las cooperativas, que se base en principios comunes pero que tenga en cuenta sus características específicas, debe permitirles actuar fuera de sus fronteras nacionales, en todo o en parte del territorio de la Comunidad.

(13) El objetivo esencial del presente Reglamento es permitir la constitución de SCE por particulares residentes en distintos Estados miembros o por entidades jurídicas sujetas a las legislaciones de Estados miembros distintos. Sus disposiciones permitirán, asimismo, que se constituya una SCE mediante la fusión de dos cooperativas existentes o mediante la transformación de una cooperativa nacional en SCE sin mediar disolución, siempre que dicha cooperativa tenga su domicilio social y su administración central en un Estado miembro y un establecimiento o filial en otro.

(14) Habida cuenta del carácter específicamente comunitario de la SCE, el régimen de la sede real que el presente Reglamento establece para las SCE se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en las legislaciones de los Estados miembros y no prejuzga de las opciones que puedan adoptarse para otras normas comunitarias en materia de derecho de sociedades.

(15) El término "capital" en el presente Reglamento se refiere únicamente al capital suscrito. No se aplica al capital social y activos comunes no distribuidos de la SCE.

(16) El ámbito de aplicación del Reglamento no incluye otros ámbitos legislativos como la fiscalidad, la competencia, la propiedad intelectual o la insolvencia. Por consiguiente, en los ámbitos antes mencionados y en otros ámbitos no cubiertos por el presente Reglamento serán aplicables las disposiciones del Derecho de los Estados miembros y del Derecho comunitario.

(17) Las normas relativas a la implicación de los trabajadores en la sociedad cooperativa europea se establecen en la Directiva 2003/72/CE(12), cuyas disposiciones constituyen, pues, un complemento indisociable del presente Reglamento y deben aplicarse concomitantemente.

(18) Los trabajos de aproximación del Derecho nacional de sociedades han avanzado considerablemente, lo cual permite que determinadas disposiciones del Estado miembro del domicilio social de la SCE adoptadas en aplicación de las directivas relativas a las sociedades mercantiles también puedan aplicarse mutatis mutandis a la SCE en aquellos ámbitos en que su funcionamiento no exija normas comunitarias uniformes, por ser apropiadas tales disposiciones para la regulación de la SCE, en particular:

- la primera Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el segundo párrafo del artículo 48 del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros(13),

- la cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad(14),
- la séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, relativa a las cuentas consolidadas(15),
- la octava Directiva 84/253/CEE del Consejo, de 10 de abril de 1984, relativa a la autorización de las personas encargadas del control legal de documentos contables(16).
- la undécima Directiva 89/666/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la publicidad de las sucursales constituidas en un Estado miembro por determinadas formas de sociedades sometidas al Derecho de otro Estado(17).

(19) Las actividades en el sector de los servicios financieros, en especial en lo que se refiere a las entidades de crédito y las empresas de seguros, han sido objeto de medidas legislativas previstas en las siguientes Directivas:

- Directiva 86/635/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1986, relativa a las cuentas anuales y consolidadas de los bancos y otras entidades financieras(18),
- Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida (tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida)(19).

(20) El recurso al presente Estatuto debe ser facultativo.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Naturaleza de la SCE

1. Podrán constituirse sociedades cooperativas en el territorio de la Comunidad en la forma de una sociedad cooperativa europea (denominada en lo sucesivo "SCE") en las condiciones y con arreglo a las modalidades establecidas en el presente Reglamento.

2. El capital suscrito de una SCE estará dividido en participaciones.

El número de socios y el capital de la SCE serán variables.

Salvo en los casos en que los estatutos de una SCE dispongan otra cosa cuando ésta se constituya, cada socio sólo responderá hasta el límite del capital que haya suscrito. Cuando los miembros de una SCE tengan una responsabilidad limitada, la denominación de dicha SCE deberá terminar con la mención "limitada".

3. La SCE tendrá por objeto principal la satisfacción de las necesidades y el fomento de las actividades económicas y sociales de sus socios, en particular mediante la conclusión de acuerdos con ellos para el suministro de bienes o servicios o la ejecución de obras en el desempeño de la actividad que ejerza o haga ejercer la SCE. La SCE podrá asimismo tener por objeto la satisfacción de las necesidades de sus socios mediante el fomento de su participación en actividades económicas, en el modo mencionado, en una o más SCE o sociedades cooperativas nacionales. La SCE podrá llevar a cabo sus actividades a través de una filial.

4. La SCE no podrá admitir que terceros no socios se beneficien de sus actividades o participen en sus operaciones, salvo disposición en contrario de los estatutos.

5. La SCE tendrá personalidad jurídica.

6. La implicación de los trabajadores en una SCE se regirá por lo dispuesto en la Directiva 2003/72/CE.

Artículo 2

Constitución

1. La SCE podrá constituirse:

- por un mínimo de cinco personas físicas que residan en al menos dos Estados miembros,
- por un mínimo de cinco personas físicas y sociedades en la acepción del segundo párrafo del artículo 48 del Tratado, así como otras entidades jurídicas de Derecho público o privado constituidas con arreglo al ordenamiento jurídico de un Estado miembro, que residan o estén reguladas por el ordenamiento jurídico de al menos dos Estados miembros,
- por sociedades con arreglo al segundo párrafo del artículo 48 del Tratado y otras entidades jurídicas de Derecho público o privado constituidas con arreglo al ordenamiento jurídico de un Estado miembro, reguladas por el ordenamiento jurídico de al menos dos Estados miembros,
- por fusión de cooperativas constituidas con arreglo al ordenamiento jurídico de un Estado miembro y con domicilio social y administración central en la Comunidad, si al menos dos de ellas están reguladas por el ordenamiento jurídico de distintos Estados miembros,
- por transformación de una sociedad cooperativa constituida con arreglo al ordenamiento jurídico de un Estado miembro y con domicilio social y administración central en la Comunidad, siempre que haya tenido un establecimiento o una filial regulada por el ordenamiento jurídico de otro Estado miembro durante, al menos, dos años.

2. Los Estados miembros podrán disponer que una entidad jurídica que no tenga su administración central en la Comunidad pueda participar en la constitución de una SCE, siempre y cuando tal entidad jurídica esté constituida con arreglo al ordenamiento jurídico de un Estado miembro, tenga su domicilio social en ese mismo Estado miembro y tenga una vinculación efectiva y continua con la economía de un Estado miembro.

Artículo 3

Capital mínimo

1. El capital de la SCE se expresará en la moneda nacional. Una SCE cuyo domicilio social se encuentre fuera de la zona del euro también podrá expresar su capital en euros.

2. El capital suscrito no podrá ser inferior a 30000 euros.

3. Cuando la legislación de un Estado miembro fije un capital suscrito superior para entidades jurídicas que ejerzan determinados tipos de actividad, dicha legislación se aplicará a las SCE que tengan su domicilio social en dicho Estado miembro.

4. Los estatutos fijarán una cantidad por debajo de la cual no podrá reducirse el capital suscrito debido al reembolso de las participaciones de los socios que dejen de formar parte de la SCE. Esta cantidad no podrá ser inferior al importe contemplado en el apartado 2. La fecha límite que fija el artículo 16 para el reembolso a que tienen derecho los socios que dejen de formar parte de la SCE quedará suspendida en la medida en que el reembolso entrañe la reducción del capital suscrito por debajo del límite prescrito.

5. El capital podrá aumentarse mediante aportaciones sucesivas de los socios o por admisión de nuevos socios y reducirse mediante reembolso total o parcial de las aportaciones, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4.

La variación del capital no requerirá modificación de los estatutos ni publicidad.

Artículo 4

Capital de la SCE

1. El capital suscrito de la SCE estará representado por las participaciones de los socios expresadas en moneda nacional. Una SCE cuyo domicilio social se encuentre fuera de la zona del euro también podrá expresar sus participaciones en euros. Podrán emitirse distintas categorías de participaciones.

Los estatutos podrán prever que las distintas categorías de participaciones confieran distintos derechos en lo que respecta a la distribución de resultados. Las participaciones que confieran los mismos derechos constituirán una categoría.

2. El capital sólo podrá constituirse con activos susceptibles de valoración económica. Las participaciones de los socios no podrán emitirse en contrapartida de compromisos contraídos en relación con la ejecución de obras o la prestación de servicios.

3. Las participaciones serán obligatoriamente nominativas. El valor nominal de las participaciones de la misma categoría será idéntico. Dicho valor se fijará en los estatutos. No podrán emitirse participaciones por un importe inferior a su valor nominal.

4. Las participaciones emitidas como contrapartida de aportaciones dinerarias deberán hacerse efectivas como mínimo en un 25 % de su valor nominal en el momento de la suscripción. El saldo restante se desembolsará en un plazo máximo de cinco años, salvo que los estatutos establezcan un plazo más breve.

5. Las participaciones emitidas en contrapartida de aportaciones no dinerarias deberán abonarse totalmente en el momento de la suscripción.

6. La legislación aplicable a las sociedades anónimas en los Estados miembros donde la SCE tenga su domicilio social en lo que se refiere a la designación de expertos y la valoración de las participaciones no dinerarias se aplicará mutatis mutandis a las SCE.

7. Los estatutos fijarán el número mínimo de participaciones que deben suscribirse para acceder a la condición de socio. Si prevén que la mayoría en las asambleas generales se reserve a los socios que sean personas físicas y establecen una obligación de suscripción ligada a la participación de los socios en la actividad de la SCE, no podrán imponer para la adquisición de la condición de socio la suscripción de más de una participación.

8. Una resolución de la asamblea general anual, que se pronunciará sobre las cuentas del ejercicio, determinará el importe del capital al cierre del ejercicio y su variación en relación con el ejercicio anterior.

A propuesta de los órganos de administración o de dirección podrá aumentarse el capital suscrito por incorporación de todas o parte de las reservas distribuibles, en virtud de un acuerdo adoptado por la asamblea general con arreglo a las condiciones de quórum y de mayoría requeridas para la modificación de los estatutos. Las nuevas participaciones corresponderán a los socios prorrateadas por las participaciones de que ya disponían en el capital.

9. El valor nominal de las participaciones podrá aumentarse agrupando participaciones emitidas. Cuando este aumento precise aportaciones complementarias de los socios según las disposiciones establecidas en los estatutos, el acuerdo de la asamblea general deberá adoptarse con arreglo a las condiciones de quórum y de mayoría requeridas para la modificación de los estatutos.

10. El valor nominal de las participaciones podrá reducirse por división de las participaciones emitidas.

11. En las condiciones que fijen los estatutos y con el acuerdo de la asamblea general o del órgano de dirección o de administración, las participaciones podrán cederse o transmitirse a un socio o a quienquiera que adquiriera la condición de socio.

12. Queda prohibida la suscripción, compra y aceptación en garantía por parte de la SCE de sus propias participaciones, ya sea directamente o por medio de una persona que actúe en nombre propio pero por cuenta de la SCE.

No obstante, estará autorizada la aceptación de participaciones en garantía para las operaciones corrientes de las SCE que sean entidades de crédito.

Artículo 5

Estatutos

1. A efectos del presente Reglamento, la expresión "estatutos de la SCE" designará a la vez el acto constitutivo y, cuando constituyan un acto separado, los estatutos propiamente dichos de la SCE.
2. Los fundadores elaborarán los estatutos, de conformidad con las disposiciones previstas para la constitución de cooperativas sujetas a la legislación del Estado miembro del domicilio social de la SCE. Los estatutos deberán redactarse por escrito y llevar la firma de los fundadores.
3. La legislación en materia de control preventivo aplicable en los Estados miembros donde la SCE tenga su domicilio social a las sociedades anónimas durante la fase de constitución se aplicará mutatis mutandis al control de la constitución de la SCE.
4. En los estatutos se consignará por lo menos:
 - la denominación social, precedida o seguida de las siglas "SCE", y, cuando proceda, la mención "limitada",
 - el objeto social,
 - el nombre de las personas físicas y la denominación social de las entidades que sean socios fundadores de la SCE, con indicación en este último caso del objeto y del domicilio social,
 - el domicilio social de la SCE,
 - las condiciones y procedimientos de admisión, exclusión y renuncia de los socios,
 - los derechos y obligaciones de los socios y, en su caso, sus diferentes categorías, así como los derechos y obligaciones de cada categoría,
 - el valor nominal de las participaciones suscritas, el importe del capital suscrito, en su caso, y la indicación de que el capital es variable,
 - las normas específicas relativas a los excedentes que deban destinarse, en su caso, a la reserva legal,
 - los poderes y competencias de los miembros de cada órgano de gobierno,
 - las condiciones de designación y revocación de los miembros de los órganos de gobierno,
 - las reglas de mayoría y quórum,
 - la duración de la sociedad, si se trata de una sociedad de duración limitada.

Artículo 6

Domicilio social

El domicilio social de la SCE deberá estar situado dentro de la Comunidad, en el mismo Estado miembro que su administración central. Además, los Estados miembros podrán imponer a las SCE registradas en su territorio la obligación de situar la administración central y el domicilio social en el mismo lugar.

Artículo 7

Traslado del domicilio social

1. El domicilio social de la SCE podrá trasladarse a otro Estado miembro con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 a 16. Dicho traslado no dará lugar a la disolución de la SCE ni a la creación de una nueva persona jurídica.
2. El órgano de dirección o de administración deberá elaborar un proyecto de traslado, que se dará a conocer conforme a lo dispuesto en el artículo 12, sin perjuicio de otras formas de publicidad previstas por el Estado miembro en que la SCE tenga su domicilio

social. Este proyecto mencionará la denominación social, el domicilio social y el número de inscripción en el registro actuales de la SCE e incluirá:

- a) el domicilio social propuesto para la SCE;
- b) los estatutos propuestos para la SCE, incluida, en su caso, la nueva denominación social;
- c) las fechas propuestas para el traslado;
- d) cualquier repercusión que pueda tener el traslado en la implicación de los trabajadores en la SCE;
- e) todos los derechos previstos para la protección de los socios, los acreedores y los titulares de otros derechos.

3. El órgano de dirección o de administración redactará un informe en el que se expliquen y justifiquen los aspectos jurídicos y económicos del traslado así como sus efectos sobre el empleo y se expongan las consecuencias de dicho traslado para los socios, los acreedores, los trabajadores y los titulares de otros derechos.

4. Los socios, los acreedores de la SCE y los titulares de otros derechos, y cualquier entidad que, de conformidad con la legislación nacional, pueda ejercer este derecho tendrán, durante al menos un mes antes de la asamblea general que deba pronunciarse sobre el traslado, el derecho de examinar, en el domicilio social de la SCE, el proyecto de traslado y el informe preparado con arreglo al apartado 3, así como el derecho de obtener gratuitamente, si así lo solicitaren, copias de dichos documentos.

5. Cualquier socio que se haya pronunciado en la asamblea general o en una asamblea sectorial o de sección en contra del traslado del domicilio podrá presentar su renuncia en el plazo de dos meses a partir del acuerdo de la asamblea general. La pérdida de la condición de socio surtirá efecto al final del ejercicio financiero en el que se haya presentado la renuncia; el traslado no surtirá efectos respecto del socio que se encuentre en esta situación. La renuncia dará derecho al reembolso de participaciones en las condiciones previstas en el apartado 4 del artículo 4 y en el artículo 16.

6. La decisión de traslado no podrá adoptarse hasta dos meses después de la publicación del proyecto. Deberá adoptarse de conformidad con el apartado 4 del artículo 62.

7. Antes de que la autoridad competente expida el certificado a que se refiere el apartado 8, la SCE deberá demostrar que, por lo que respecta a cualquier obligación contraída con anterioridad a la publicación del proyecto de traslado, los intereses de acreedores y titulares de otros derechos en relación con la SCE (incluidos los de organismos públicos) han quedado debidamente protegidos de conformidad con lo estipulado por el Estado miembro en el que la SCE tenga su domicilio social antes del traslado.

Los Estados miembros podrán hacer extensiva la aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo a las obligaciones nacidas o que pudieran nacer antes del traslado.

El primer y segundo párrafos no afectarán a la aplicación a las SCE de las legislaciones nacionales de los Estados miembros sobre liquidación o garantía de los pagos a organismos públicos.

8. En el Estado miembro del domicilio social de la SCE, un tribunal, un notario u otra autoridad competente expedirá un certificado que acredite de manera concluyente el cumplimiento de los actos y trámites que han de realizarse antes del traslado.

9. La nueva inscripción sólo podrá efectuarse previa presentación del certificado mencionado en el apartado 8, así como de la prueba del cumplimiento de los trámites requeridos para el registro en el país del nuevo domicilio.

10. El traslado del domicilio social de la SCE, así como la correspondiente modificación de los estatutos, surtirán efecto en la fecha en que, con arreglo al apartado 1 del artículo 11, la SCE se haya inscrito en el registro del nuevo domicilio.

11. Cuando la SCE se haya inscrito en el registro del nuevo domicilio, dicho registro enviará una notificación al registro del domicilio social anterior. La baja en el registro

anterior se producirá al recibo de dicha notificación, y en ningún caso con anterioridad a la misma.

12. En los Estados miembros correspondientes se publicarán, de conformidad con el artículo 12, la inscripción y la baja respectivas.

13. A partir de la publicación de la nueva inscripción de la SCE, el nuevo domicilio surtirá efecto frente a terceros. No obstante, hasta que no se publique la baja en el registro del anterior domicilio, los terceros podrán seguir prevaleciéndose del domicilio antiguo salvo en los casos en que la SCE demuestre que tenían conocimiento del nuevo domicilio.

14. La legislación de un Estado miembro podrá establecer, en lo que respecta a las SCE registradas en su territorio, que un traslado de domicilio social que suponga un cambio de la legislación aplicable no surtirá efecto si, en el plazo de dos meses indicado en el apartado 6, la autoridad competente de dicho Estado miembro se opusiere a ello. Sólo podrá producirse esta oposición por razones de interés público.

Cuando una SCE sea supervisada por una autoridad nacional financiera de control con arreglo a directivas comunitarias, el derecho de oponerse al cambio de domicilio social se aplicará asimismo a dicha autoridad.

Podrá recurrirse contra dicha oposición ante la autoridad judicial competente.

15. Una SCE respecto de la cual se haya iniciado un procedimiento de disolución, incluida la disolución voluntaria, liquidación, insolvencia, suspensión de pagos u otros procedimientos análogos, no podrá trasladar su domicilio social.

16. Se considerará que una SCE que haya trasladado su domicilio social a otro Estado miembro, con respecto a cualquier reclamación que se suscitara con anterioridad a dicho traslado tal como se define en el apartado 10, tiene su administración central y su domicilio social en el Estado miembro donde dicha SCE estuviera registrada con anterioridad al traslado, aun cuando la demanda interpuesta contra la SCE sea posterior al traslado.

Artículo 8

Legislación aplicable

1. Las SCE se registrarán:

a) por lo dispuesto en el presente Reglamento;

b) cuando el presente Reglamento lo autorice expresamente, por las disposiciones de los estatutos de la SCE;

c) respecto de las materias no reguladas por el presente Reglamento o, si se trata de materias reguladas sólo en parte, respecto de los aspectos no cubiertos por el presente Reglamento:

i) por la legislación que adopten los Estados miembros en aplicación de medidas comunitarias que se refieran específicamente a las SCE,

ii) por las leyes de los Estados miembros que fuesen de aplicación a una sociedad cooperativa constituida con arreglo a la legislación del Estado miembro en el que la SCE tenga su domicilio social,

iii) por las disposiciones de los estatutos, en las mismas condiciones que rigen para las sociedades cooperativas constituidas con arreglo a la legislación del Estado miembro en el que la SCE tenga su domicilio social.

2. Si las leyes nacionales dispusieran reglas o restricciones específicas relacionadas con el carácter de la actividad que realice una SCE, o mecanismos de control a cargo de una autoridad supervisora, dichas leyes serán plenamente aplicables a la SCE.

Artículo 9

Principio de no discriminación

Con sujeción a las disposiciones del presente Reglamento, la SCE recibirá en cada Estado miembro el mismo trato que una sociedad cooperativa constituida con arreglo a la legislación del Estado miembro en el que la SCE tenga su domicilio social.

Artículo 10

Datos que deberán figurar en los documentos de la SCE

1. La legislación aplicable a las sociedades anónimas en lo que se refiere al contenido de las cartas y documentos destinados a terceros se aplicará mutatis mutandis a las SCE. La denominación social de la SCE irá precedida o seguida de las siglas "SCE" y, cuando corresponda, de la mención "limitada".
2. Sólo las SCE podrán llevar las siglas "SCE" delante o detrás de su denominación social, con el fin de especificar su naturaleza jurídica.
3. No obstante, las sociedades u otras entidades jurídicas registradas en un Estado miembro antes de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento en cuyas denominaciones sociales figuren las siglas "SCE" no estarán obligadas a modificar su denominación social.

Artículo 11

Inscripción en el registro y contenido de la publicidad

1. Toda SCE deberá estar registrada en el Estado miembro de su domicilio social, en el registro que señale la legislación de ese Estado miembro de conformidad con la legislación aplicable a las sociedades anónimas.
2. No podrá registrarse ninguna SCE salvo que se haya celebrado un acuerdo de implicación de los trabajadores en virtud del artículo 4 de la Directiva 2003/72/CE, se haya tomado una decisión en virtud del apartado 6 del artículo 3 de la misma o haya expirado el período de negociaciones conforme a su artículo 5 sin que se haya celebrado ningún acuerdo.
3. Para que una SCE constituida mediante fusión pueda registrarse en un Estado miembro que haya ejercido la potestad a que se refiere el apartado 3 del artículo 7 de la Directiva 2003/72/CE, será preciso bien que se haya celebrado un acuerdo de implicación -incluida la participación- de los trabajadores en virtud del artículo 4 de la mencionada Directiva, o bien que ninguna de las cooperativas participantes haya estado sujeta a las normas de participación antes de la inscripción de la SCE.
4. Los estatutos de las SCE en ningún caso podrán ser contrarios a las disposiciones relativas a la implicación de los trabajadores que se hayan fijado. Cuando en virtud de la Directiva 2003/72/CE se determinen nuevas disposiciones en materia de implicación que sean contrarias a los estatutos existentes, éstos habrán de ser modificados en la medida necesaria.

En ese caso, los Estados miembros podrán disponer que el órgano de dirección o el órgano de administración de la SCE esté facultado para modificar los estatutos sin nuevo acuerdo de la asamblea general.

5. La legislación aplicable a las sociedades anónimas en materia de publicidad de los actos y datos se aplicará mutatis mutandis a las SCE.

Artículo 12

Publicidad en los Estados miembros

1. Los documentos y los datos de una SCE a los que deba darse publicidad en virtud del presente Reglamento se harán públicos del modo que estipule la legislación en materia de sociedades anónimas del Estado miembro en el que la SCE tiene su domicilio social.

2. Las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la Directiva 89/666/CEE se aplicarán a las sucursales de la SCE creadas en un Estado miembro distinto del de su domicilio social. No obstante, los Estados miembros podrán establecer excepciones a las disposiciones nacionales de desarrollo de dicha Directiva a fin de reflejar las particularidades de las cooperativas.

Artículo 13

Publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea

1. La inscripción y la baja de una SCE se publicarán a título informativo en el Diario Oficial de la Unión Europea, tras la publicación efectuada de conformidad con el artículo 12. En el anuncio se indicará la denominación social, el número, la fecha y el lugar de la inscripción de la SCE, la fecha, el lugar y el título de la publicación, el domicilio social de la SCE y su sector de actividad.

2. El traslado del domicilio social de la SCE en las condiciones previstas en el artículo 8 dará lugar a un anuncio con los datos indicados en el apartado 1 además de los relativos a la nueva inscripción.

3. Los datos a que se refiere el apartado 1 se comunicarán a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas en el mes siguiente a la publicación a que se refiere el apartado 1 del artículo 12.

Artículo 14

Adquisición de la condición de socio

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 33, la adquisición de la condición de socio de la SCE estará sujeta a la aprobación del órgano de dirección o de administración. Las decisiones de denegación podrán recurrirse ante la asamblea general siguiente a la solicitud de admisión.

Cuando la legislación del Estado miembro del domicilio social de la SCE lo permita, los estatutos podrán prever la admisión, en calidad de socios inversores (no usuarios), de personas que no tengan intención de utilizar o de producir los bienes y servicios de la SCE. En este caso, la adquisición de la condición de socio estará sujeta a una votación de la asamblea general o de cualquier otro órgano en el que la asamblea general o los estatutos hayan delegado este cometido.

Se considerará que los socios que sean entidades jurídicas tienen la condición de usuarios por representar a sus propios socios, siempre que aquellos de sus socios que sean personas físicas sean usuarios.

Salvo en los casos en que los estatutos dispongan lo contrario, la condición de socio de una SCE podrá ser adquirida por personas físicas o por entidades jurídicas.

2. Los estatutos podrán subordinar la admisión a otras condiciones, en particular a:

- la suscripción de un importe mínimo del capital,
- condiciones relacionadas con el objeto de la sociedad cooperativa.

3. Cuando los estatutos así lo dispongan, podrán dirigirse a los socios solicitudes de participación complementaria en el capital.

4. En el domicilio social de la SCE existirá un fichero de todos los socios, en el que constarán su dirección, el número y, en su caso, la clase de participaciones que posean. Cualquier persona con un interés legítimo directo podrá, previa petición, consultar dicho fichero y obtener una copia parcial o total del mismo, sin que el precio que deba abonarse por dicha copia pueda ser superior a su coste administrativo.

5. Cualquier operación que tenga por efecto modificar la titularidad o la distribución del capital, o su aumento o reducción, se inscribirá en el fichero de socios indicado en el apartado 4 a más tardar en el mes siguiente a la modificación.

6. Las operaciones mencionadas en el apartado 5 no surtirán efectos frente a la SCE o frente a terceros que tengan un interés legítimo y directo hasta que no estén inscritas en el fichero indicado en el apartado 4.
7. El socio recibirá, previa petición, una certificación escrita de la inscripción.

Artículo 15

Pérdida de la condición de socio

1. La condición de socio se perderá por:

- renuncia,
- expulsión, cuando el socio haya incumplido gravemente sus obligaciones o haya incurrido en actos contrarios a los intereses de la SCE,
- cesión de todas las participaciones a un socio o a una persona física o entidad jurídica que adquiera la condición de socio, cuando así lo autoricen los estatutos,
- disolución en el caso de un socio que no sea persona física,
- quiebra,
- fallecimiento,
- y en los demás supuestos previstos en los estatutos o en la legislación sobre cooperativas del Estado miembro del domicilio social de la SCE.

2. Cualquier socio minoritario que se haya opuesto en la asamblea general a una modificación de los estatutos:

i) que entrañe nuevas obligaciones en materia de aportaciones dinerarias u otras prestaciones, o

ii) que amplíe sustancialmente las obligaciones existentes para los socios, o

iii) que amplíe a más de cinco años el plazo de preaviso para la renuncia a la condición de socio de la SCE,

podrá presentar su renuncia en el plazo de dos meses a partir del acuerdo de la asamblea general.

Su condición de socio se extinguirá al término del ejercicio en curso, en los casos señalados en los incisos i) y ii) del primer párrafo, y al cumplirse el plazo de preaviso vigente antes de la modificación de los estatutos, en el caso mencionado en el inciso iii). La modificación de los estatutos no surtirá efectos frente a él. La renuncia dará derecho al reembolso de participaciones en las condiciones previstas en el apartado 4 del artículo 3 y en el artículo 16.

3. La expulsión de un socio se hará por decisión del órgano de administración o de dirección, previa audiencia del interesado. El socio podrá recurrir contra esta decisión ante la asamblea general.

Artículo 16

Derechos pecuniarios de los socios en caso de renuncia o expulsión

1. Salvo en el caso de cesión de participaciones y con sujeción a lo dispuesto en el artículo 3, la pérdida de la condición de socio dará derecho al reembolso de la parte del capital suscrito, deducida, en su caso, la parte proporcional de las pérdidas imputables al capital social.

2. Las cantidades que habrá que deducir en virtud del apartado 1 se calcularán de acuerdo con el balance del ejercicio en el curso del cual hubiere nacido el derecho al reembolso.

3. Los estatutos establecerán las modalidades y condiciones del ejercicio del derecho de renuncia y fijarán el plazo, para efectuar el reembolso, que no podrá ser en ningún caso de más de tres años. En cualquier caso, la SCE no tendrá obligación de efectuar el reembolso antes de los seis meses siguientes a la aprobación del balance posterior a la pérdida de la condición de socio.

4. Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 serán asimismo de aplicación en caso de que se reembolse sólo una parte de las participaciones que posea un socio.

CAPÍTULO II CONSTITUCIÓN

Sección 1 Disposiciones generales

Artículo 17

Legislación aplicable durante la constitución

1. Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, la constitución de una SCE se regirá por la legislación aplicable a las cooperativas del Estado en que la SCE fije su domicilio social.
2. La inscripción de una SCE se hará pública con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12.

Artículo 18

Adquisición de personalidad jurídica

1. La SCE adquirirá personalidad jurídica el día de su inscripción, en el Estado miembro de su domicilio social, en el registro señalado por dicho Estado con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 11.
2. En el caso de que se hayan realizado actos en nombre de la SCE antes de su inscripción con arreglo al artículo 11 y de que, después de dicha inscripción, la SCE no asuma las obligaciones que se deriven de dichos actos, las personas físicas, sociedades u otras entidades jurídicas que los hayan realizado responderán solidariamente de los mismos, salvo acuerdo contrario.

Sección 2 Constitución mediante fusión

Artículo 19

Procedimiento de constitución mediante fusión

Podrá constituirse una SCE mediante una fusión que se realice:

- bien con arreglo al procedimiento de fusión por absorción,
- bien con arreglo al procedimiento de fusión por constitución de una nueva persona jurídica.

En caso de fusión por absorción, la cooperativa absorbente adoptará la forma de SCE simultáneamente a la fusión. En caso de fusión por constitución de una nueva persona jurídica, esta última adoptará la forma de una SCE.

Artículo 20

Ley aplicable en caso de fusión

Para las materias no reguladas en la presente sección o, cuando una materia lo esté parcialmente, para los aspectos no cubiertos por ella, toda cooperativa que participe en la constitución de una SCE mediante fusión se regirá por las disposiciones del ordenamiento jurídico del Estado miembro a que esté sujeta que sean aplicables a las fusiones de cooperativas y, en su defecto, a las disposiciones aplicables a las fusiones internas de sociedades anónimas sujetas al ordenamiento jurídico de dicho Estado.

Artículo 21

Motivos de oposición a una fusión

En la legislación de los Estados miembros se podrá establecer que una cooperativa sujeta al ordenamiento jurídico del Estado miembro de que se trate no podrá participar en la constitución de una SCE por medio de fusión en caso de que una autoridad competente de dicho Estado miembro se oponga a ello antes de la expedición del certificado a que se refiere el apartado 2 del artículo 29.

Sólo podrá producirse esta oposición por razones de interés público. Podrá recurrirse contra dicha oposición por vía judicial.

Artículo 22

Condiciones de la fusión

1. Los órganos de dirección o de administración de las cooperativas que se fusionen elaborarán un proyecto de fusión. Este contendrá los datos siguientes:

a) la denominación y el domicilio social de las cooperativas que se fusionen y los previstos para la SCE;

b) la relación de canje de las participaciones en el capital suscrito y, en su caso, el importe del pago en efectivo; si no hubiere participaciones, el reparto exacto de los activos y su valor equivalente en participaciones;

c) las formas de entrega de las participaciones de la SCE;

d) la fecha a partir de la cual estas participaciones darán derecho a participar en los beneficios, así como toda condición especial que afecte a este derecho;

e) la fecha a partir de la cual las operaciones de las cooperativas que se fusionen se considerarán, desde el punto de vista contable, como realizadas por cuenta de la SCE;

f) las modalidades o ventajas particulares que se refieran a los títulos distintos de las participaciones o a las obligaciones que, de conformidad con el artículo 66, no confieran la condición de socio;

g) los derechos que garantiza la SCE a los titulares de participaciones que tengan derechos especiales y a los portadores de títulos distintos de las participaciones, o las medidas propuestas respecto a ellos;

h) la forma de protección de los derechos de los acreedores de las cooperativas que se fusionen;

i) todas las ventajas particulares atribuidas a los peritos que estudien el proyecto de fusión, así como a los miembros de los órganos de administración, de dirección, de vigilancia o de control de las cooperativas que se fusionen;

j) los estatutos de la SCE;

k) información sobre los procedimientos mediante los cuales se determinen las condiciones de implicación de los trabajadores de conformidad con la Directiva 2003/72/CE.

2. Las cooperativas que se fusionen podrán añadir otros elementos al proyecto de fusión.

3. La legislación aplicable a las sociedades anónimas en materia de proyectos de fusión se aplicará mutatis mutandis a la fusión transfronteriza de cooperativas para la creación de una SCE.

Artículo 23

Explicación y justificación de las condiciones de la fusión

Los órganos de dirección o de administración de cada una de las cooperativas que se fusionen establecerán un informe escrito exhaustivo en el que se explique y se justifique desde el punto de vista jurídico y económico el proyecto de fusión y, en particular, la relación de canje de las participaciones. El informe indicará además las dificultades de evaluación particulares que puedan haberse presentado.

Artículo 24

Publicación

1. La legislación aplicable a las sociedades anónimas sobre la publicidad de los proyectos de fusión se aplicará mutatis mutandis a cada cooperativa que se fusione, sin perjuicio de los requisitos adicionales impuestos por el Estado miembro al que ésta esté sujeta.
2. La publicación del proyecto de fusión en el boletín oficial deberá contener, no obstante, los siguientes datos relativos a cada una de las cooperativas que se fusionen:
 - a) la forma, la denominación y el domicilio social de las cooperativas que se fusionen;
 - b) la dirección del lugar o registro en el que se hayan entregado los estatutos y todos los demás documentos y datos correspondientes a cada una de las cooperativas que se fusionan, y el número de inscripción en dicho registro;
 - c) las condiciones de ejercicio de los derechos de los acreedores de la cooperativa de que se trate de conformidad con el artículo 28, así como la dirección donde pueda obtenerse, sin gastos, una información exhaustiva sobre dichas condiciones;
 - d) las condiciones de ejercicio de los derechos de los socios de la cooperativa de que se trate de conformidad con el artículo 28, así como la dirección donde pueda obtenerse, sin gastos, una información exhaustiva sobre dichas condiciones;
 - e) la denominación y el domicilio social previstos para la SCE;
 - f) las condiciones que determinarán, de conformidad con el artículo 31, la fecha en la que surtirá efectos la fusión.

Artículo 25

Información

1. Todo socio tendrá derecho, por lo menos un mes antes de la fecha en que se reúna la asamblea general convocada para pronunciarse sobre la fusión, a inspeccionar en el domicilio social los documentos siguientes:
 - a) el proyecto de fusión mencionado en el artículo 22;
 - b) las cuentas anuales y los informes de gestión de los tres últimos ejercicios de las cooperativas que se fusionen;
 - c) un estado de situación contable, redactado de conformidad con las disposiciones aplicables a las fusiones internas de sociedades anónimas, siempre que dichas disposiciones exijan la elaboración del estado de situación contable;
 - d) el informe de los expertos sobre el valor de las participaciones que deberán repartirse a cambio de los activos de las cooperativas que se fusionen o la relación de canje de las participaciones mencionado en el artículo 26;
 - e) el informe de los órganos de administración o de dirección de la cooperativa mencionado en el artículo 23.
2. Todo socio que lo solicite podrá obtener sin gastos la copia integra o, si lo desea, un resumen, de los documentos contemplados en el apartado 1.

Artículo 26

Informe de expertos independientes

1. Para cada una de las cooperativas que se fusionen, uno o varios expertos independientes, designados de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 4, deberán examinar el proyecto de fusión y establecer un informe escrito destinado a los socios.
2. Podrá elaborarse un informe único para todas las cooperativas que se fusionen cuando las legislaciones de los Estados miembros a las que estén sujetas dichas cooperativas lo permitan.

3. La legislación aplicable a las fusiones de sociedades anónimas en relación con los derechos y obligaciones de los expertos se aplicará mutatis mutandis a las fusiones de cooperativas.

Artículo 27

Aprobación de las condiciones de la fusión

1. La asamblea general de cada una de las cooperativas que se fusionen deberá aprobar el proyecto de fusión.

2. La implicación de los trabajadores en la SCE se decidirá con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2003/72/CE. Las asambleas generales de cada una de las cooperativas que se fusionen podrán reservarse la posibilidad de condicionar el registro de la SCE a la ratificación expresa por ésta de las disposiciones que así se determinen.

Artículo 28

Legislación aplicable a la constitución por fusión

1. El ordenamiento jurídico del Estado miembro donde esté registrada cada una de las cooperativas que se fusionen se aplicará como en los casos de fusión de sociedades anónimas, teniendo en cuenta el carácter transfronterizo de la fusión, en lo que se refiere a la protección de los intereses de:

- los acreedores de las cooperativas que se fusionen,
- los obligacionistas de las cooperativas que se fusionen.

2. Los Estados miembros podrán adoptar, respecto de las cooperativas participantes en una fusión constituidas con arreglo a su ordenamiento jurídico, disposiciones encaminadas a garantizar una protección adecuada a los socios que se hayan pronunciado en contra de la fusión.

Artículo 29

Control del procedimiento de fusión

1. Para la parte del procedimiento correspondiente a cada cooperativa que se fusione, el control de la legalidad de la fusión se efectuará con arreglo a la legislación aplicable a la fusión de cooperativas del Estado miembro al que esté sujeta la cooperativa que se fusiona y, en su defecto, con arreglo a las disposiciones aplicables a las fusiones internas de sociedades anónimas sujetas al ordenamiento jurídico de dicho Estado.

2. En cada Estado miembro implicado un tribunal, un notario u otra autoridad competente expedirá un certificado que acredite el cumplimiento de los actos y trámites previos a la fusión.

3. Cuando el ordenamiento jurídico del Estado miembro al que esté sujeta una cooperativa que se fusione establezca un procedimiento para controlar y modificar la relación de canje de las participaciones o un procedimiento para compensar a los socios minoritarios, sin impedir la inscripción de la fusión, tales procedimientos sólo se aplicarán si las demás cooperativas participantes en la fusión, situadas en Estados miembros que no prevean tales procedimientos, aceptan explícitamente, al aprobar el proyecto de fusión de conformidad con el apartado 1 del artículo 27, la posibilidad de que los socios de dicha cooperativa que se fusiona recurran a tal procedimiento. En esos casos, el tribunal, notario u otra autoridad competente podrá expedir el certificado a que se refiere el apartado 2, aun cuando ya haya dado comienzo un procedimiento de este tipo. No obstante, en el certificado se indicará que está en curso el procedimiento. La decisión a que se llegue en el procedimiento será vinculante para la cooperativa absorbente y para todos sus socios.

Artículo 30

Control de la legalidad de la fusión

1. Para la parte del procedimiento correspondiente a la realización de la fusión y la constitución de la SCE, el control de la legalidad de la fusión deberá ser efectuado por un tribunal, un notario u otra autoridad del Estado miembro del futuro domicilio de la SCE competente en materia de control de este aspecto de la legalidad de la fusión de cooperativas y, en su defecto, de la fusión de sociedades anónimas.
2. A tal fin, cada cooperativa que se fusione remitirá a dicha autoridad el certificado mencionado en el apartado 2 del artículo 29, en el plazo de seis meses a partir de su expedición, y una copia del proyecto de fusión aprobado por la cooperativa.
3. La autoridad a que se refiere el apartado 1 controlará en particular que las cooperativas que se fusionen hayan aprobado un proyecto de fusión en los mismos términos, y que se hayan establecido las disposiciones relativas a la implicación de los trabajadores con arreglo a la Directiva 2003/72/CE.
4. Dicha autoridad también comprobará que la constitución de la SCE se ajuste a las condiciones establecidas en la legislación del Estado miembro del domicilio social.

Artículo 31

Registro de la fusión

1. La fusión y la constitución simultánea de la SCE surtirán efectos el día en que quede registrada la SCE con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 11.
2. Sólo podrá llevarse a cabo la inscripción de la SCE una vez efectuados todos los trámites contemplados en los artículos 29 y 30.

Artículo 32

Publicación

La realización de la fusión se hará pública, respecto de cada una de las cooperativas que se fusionen, por los procedimientos que prevea la legislación de cada Estado miembro, de conformidad con la legislación que regula las fusiones de sociedades anónimas.

Artículo 33

Efectos de la fusión

1. La fusión realizada con arreglo a lo dispuesto en el primer guión del primer párrafo del artículo 19 producirá ipso iure y simultáneamente los efectos siguientes:
 - a) la transmisión universal a la persona jurídica absorbente de la totalidad del patrimonio activo y pasivo de cada cooperativa absorbida;
 - b) los socios de las cooperativas absorbidas se convertirán en socios de la persona jurídica absorbente;
 - c) las cooperativas absorbidas dejarán de existir;
 - d) la persona jurídica absorbente se convertirá en SCE.
2. La fusión realizada con arreglo a lo dispuesto en el segundo guión del primer párrafo del artículo 19 producirá ipso iure y simultáneamente los efectos siguientes:
 - a) la transmisión universal a la SCE de la totalidad del patrimonio activo y pasivo de las cooperativas que se fusionen;
 - b) los socios de las cooperativas que se fusionen se convertirán en socios de la SCE;
 - c) las cooperativas que se fusionen dejarán de existir.
3. Cuando la legislación de un Estado miembro imponga en la fusión de cooperativas trámites especiales para que la transmisión de determinados bienes, derechos y obligaciones aportados por las cooperativas que se fusionen sea oponible a terceros, dichos trámites se aplicarán y serán efectuados bien por las cooperativas que se fusionen, bien por la SCE a partir del día en que tenga lugar su inscripción.

4. Los derechos y obligaciones de las cooperativas participantes en materia de condiciones de empleo tanto de carácter individual como colectivo que se deriven de la legislación y prácticas nacionales, de los contratos de trabajo individuales o de las relaciones laborales existentes en la fecha del registro, se transferirán, en razón de dicho registro, a la SCE.

Lo dispuesto en el primer párrafo no se aplicará al derecho de participación de los representantes de los trabajadores en las asambleas generales, sectoriales o de sección a que se refiere el apartado 4 del artículo 59.

5. Una vez registrada la fusión, la SCE informará inmediatamente a los socios de la cooperativa adquirida de su inscripción en el registro de socios y del número de participaciones que poseen.

Artículo 34

Legalidad de la fusión

1. No podrá declararse la nulidad de una fusión con arreglo al cuarto guión del apartado 1 del artículo 2 una vez que se haya llevado a cabo la inscripción de la SCE.

2. La ausencia de control de la legalidad de la fusión con arreglo a los artículos 29 y 30 constituye una causa de disolución de la SCE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.

Sección 3

Transformación de una cooperativa existente en SCE

Artículo 35

Procedimientos de formación por transformación

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, la transformación de una cooperativa en una SCE no producirá su disolución ni la creación de una nueva persona jurídica.

2. El domicilio social de la SCE no podrá trasladarse de un Estado miembro a otro de conformidad con el artículo 7 en el momento de la transformación.

3. El órgano de dirección o de administración de la cooperativa de que se trate establecerá un proyecto de transformación y un informe en el que se explicarán y justificarán los aspectos jurídicos y económicos de la transformación, así como sus efectos sobre el empleo, y se indicarán las consecuencias que supondrá para los socios y para los trabajadores la adopción de la forma de SCE.

4. El proyecto de transformación se hará público según las modalidades previstas en la legislación de cada Estado miembro al menos un mes antes del día en que la asamblea general deba pronunciarse sobre la transformación.

5. Antes de la celebración de la asamblea general indicada en el apartado 6, uno o más peritos independientes designados o autorizados, con arreglo a las disposiciones nacionales, por una autoridad judicial o administrativa del Estado miembro a cuya legislación esté sujeta la cooperativa que se transforma en SCE certificarán que se respeta, mutatis mutandis, lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 22.

6. La asamblea general de la cooperativa de que se trate aprobará el proyecto de transformación y los estatutos de la SCE.

7. Los Estados miembros podrán condicionar la transformación a una votación favorable, por mayoría cualificada o por unanimidad, celebrada en el órgano que controle la cooperativa que debe transformarse en el que esté organizada la participación de los trabajadores.

8. Los derechos y obligaciones de la cooperativa que vaya a transformarse en SCE en materia de condiciones de empleo, tanto de carácter individual como colectivo que se deriven de la legislación y prácticas nacionales, de los contratos de trabajo individuales o

de las relaciones laborales existentes el día de la inscripción, se transferirán, en razón de dicho registro, a la SCE.

CAPÍTULO III

ESTRUCTURA DE LA SCE

Artículo 36

Estructura de los órganos

Conforme a las condiciones establecidas en el presente Reglamento, la SCE constará de:

- a) una asamblea general, y
- b) bien un órgano de control y un órgano de dirección (sistema dual), bien un órgano de administración (sistema monista), según la opción que se haya adoptado en los estatutos.

Sección 1

Sistema dual

Artículo 37

Funciones del órgano de dirección y designación de sus miembros

1. El órgano de dirección será responsable de la gestión de la SCE y la representará frente a terceros y ante los tribunales. El Estado miembro podrá disponer que el responsable de la administración corriente sea un consejero delegado en las mismas condiciones establecidas para las cooperativas con domicilio en su territorio.

2. El miembro o los miembros del órgano de dirección serán nombrados y revocados por el órgano de control.

No obstante, el Estado miembro podrá establecer o permitir que los estatutos dispongan que el miembro o los miembros del órgano de dirección sean nombrados o revocados por la asamblea general en las mismas condiciones que se aplican a las cooperativas domiciliadas en su territorio.

3. No podrá ejercerse simultáneamente la función de miembro del órgano de dirección y del órgano de control de la misma SCE. No obstante, el órgano de control podrá, en caso de vacante, designar a uno de sus miembros para ejercer las funciones de miembro del órgano de dirección. Durante este período, las funciones del interesado en calidad de miembro del órgano de control quedarán en suspenso. Los Estados miembros podrán establecer una limitación temporal de este período.

4. Los estatutos de la SCE fijarán el número de miembros del órgano de dirección o las normas para su determinación. No obstante, los Estados miembros podrán establecer un número mínimo, máximo o ambos.

5. Los Estados miembros cuya legislación no contemple el sistema dual en relación con las cooperativas con domicilio social en su territorio podrán adoptar las medidas oportunas en relación con las SCE.

Artículo 38

Presidencia y convocatoria del órgano de dirección

1. El órgano de dirección elegirá de entre sus miembros un presidente de conformidad con las disposiciones estatutarias.

2. El presidente convocará al órgano de dirección en las condiciones que fijen los estatutos, bien por iniciativa propia o bien a petición de cualquiera de sus miembros. En la petición se deberán indicar los motivos de la convocatoria. Si la petición no es atendida en un plazo de 15 días, el órgano de dirección podrá ser convocado por el miembro o miembros que la formularon.

Artículo 39

Funciones del órgano de control y designación de sus miembros

1. El órgano de control controlará la gestión encomendada al órgano de dirección. No podrá ejercer por sí mismo el poder de gestión de la SCE. El órgano de control no podrá representar a la SCE ante terceros. Representará a la SCE ante el órgano de dirección o sus miembros en caso de litigio o en la celebración de contratos.
2. Los miembros del órgano de control serán nombrados y destituidos por la asamblea general. No obstante, los miembros del primer órgano de control podrán designarse en los estatutos. Las presentes disposiciones se entenderán sin perjuicio de las modalidades de participación de los trabajadores determinadas en virtud de la Directiva 2003/72/CE.
3. Un cuarto como máximo de los puestos del órgano de control podrá estar integrado por socios no usuarios.
4. Los estatutos establecerán el número de miembros del órgano de control o las normas para su determinación. No obstante, los Estados miembros podrán fijar el número de miembros o la composición del órgano de control de las SCE con domicilio social en su territorio, o bien un número mínimo, máximo, o ambos.

Artículo 40

Derecho de información

1. El órgano de dirección informará al órgano de control, como mínimo cada tres meses, acerca de la marcha de los asuntos de la SCE y de su evolución previsible, teniendo en cuenta cualquier información sobre las empresas controladas por la SCE que pueda influir de forma significativa en la marcha de los asuntos de esta última.
2. Además de la información periódica a que se refiere el apartado 1, el órgano de dirección comunicará a su debido tiempo al órgano de control cualquier información sobre hechos que puedan tener repercusiones sensibles en la situación de la SCE.
3. El órgano de control podrá exigir al órgano de dirección la presentación de todo tipo de información que precise para ejercer la función de control con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 39. Los Estados miembros podrán disponer que cada uno de los miembros del órgano de control goce también de esta atribución.
4. El órgano de control podrá realizar o hacer que se realicen las comprobaciones necesarias para desempeñar su cometido.
5. Cada miembro del órgano de control tendrá acceso a toda la información comunicada a dicho órgano.

Artículo 41

Presidencia y convocatoria del órgano de control

1. El órgano de control elegirá de entre sus miembros un presidente. En caso de que la mitad de los miembros hayan sido designados por los trabajadores, únicamente podrá ser elegido como presidente un miembro designado por la asamblea general.
2. El presidente convocará al órgano de control en las condiciones que fijen los estatutos, bien por iniciativa propia, bien a petición de al menos un tercio de sus miembros, o bien a petición del órgano de dirección. En la petición se deberán indicar los motivos de la convocatoria. Si la petición no es atendida en un plazo de 15 días, el órgano de control podrá ser convocado por quienes la formularon.

Sección 2

Sistema monista

Artículo 42

Funciones del órgano de administración y designación de sus miembros

1. El órgano de administración asumirá la gestión de la SCE y la representará frente a terceros y ante los tribunales. Todo Estado miembro podrá disponer que el responsable de la administración corriente sea un consejero delegado en las mismas condiciones establecidas para las cooperativas con domicilio en su territorio.

2. Los estatutos de la SCE establecerán el número de miembros del órgano de administración o las normas para su determinación. No obstante, cada Estado miembro podrá fijar un número mínimo y, en su caso, un número máximo de miembros. Sólo un cuarto como máximo de los puestos del órgano de administración podrá estar integrado por socios no usuarios.

No obstante, este órgano deberá constar de un mínimo de tres miembros cuando la participación de los trabajadores en la SCE esté organizada de conformidad con la Directiva 2003/72/CE.

3. Los miembros del órgano de administración y, cuando los estatutos así lo dispongan, los miembros suplentes, serán nombrados por la asamblea general. No obstante, los miembros del primer órgano de administración podrán designarse en los estatutos. Las presentes disposiciones se entenderán sin perjuicio de las modalidades de participación de los trabajadores determinadas en virtud de la Directiva 2003/72/CE.

4. Los Estados miembros cuya legislación no contemple el sistema monista en relación con las cooperativas con domicilio social en su territorio podrán adoptar las medidas oportunas en relación con las SCE.

Artículo 43

Periodicidad de las reuniones y derecho a la información

1. El órgano de administración se reunirá como mínimo cada tres meses, con la periodicidad que fijen los estatutos, para deliberar acerca de la marcha de los asuntos de la SCE y de su evolución previsible, teniendo en cuenta, en su caso, cualquier información sobre las empresas controladas por la SCE que puedan influir de forma significativa en la marcha de los asuntos de esta última.

2. Cada miembro del órgano de administración tendrá acceso a todos los informes, documentos e información comunicados a dicho órgano.

Artículo 44

Presidencia y convocatoria del órgano de administración

1. El órgano de administración elegirá de entre sus miembros un presidente. En caso de que la mitad de los miembros hayan sido designados por los trabajadores, únicamente podrá ser elegido como presidente un miembro designado por la asamblea general.

2. El presidente convocará al órgano de administración en las condiciones que fijen los estatutos, bien por iniciativa propia o bien a petición de al menos un tercio de sus miembros. En la petición se deberán indicar los motivos de la convocatoria. Si la petición no es atendida en un plazo de 15 días, el órgano de administración podrá ser convocado por quienes la formularon.

Sección 3

Normas comunes a los sistemas monista y dual

Artículo 45

Duración del mandato

1. Los miembros de los órganos de la SCE serán nombrados por un período establecido en los estatutos, que no podrá exceder de seis años.

2. Excepto en caso de restricciones establecidas en los estatutos, los miembros podrán ser nombrados nuevamente una o más veces por el período fijado conforme al apartado 1.

Artículo 46

Condiciones de elegibilidad

1. Los estatutos de la SCE podrán establecer que una sociedad en el sentido del artículo 48 del Tratado pueda ser miembro de uno de sus órganos, excepto cuando la legislación aplicable a las cooperativas del Estado miembro donde esté domiciliada la SCE disponga lo contrario.

Dicha sociedad deberá designar a una persona física como representante para el ejercicio de sus funciones en el órgano de que se trate. El representante estará sometido a las mismas condiciones y obligaciones que si fuera miembro de este órgano a título personal.

2. No podrán ser miembros de ninguno de los órganos de la SCE, ni representantes de un miembro en el sentido del apartado 1, las personas que:

- de acuerdo con la legislación del Estado miembro del domicilio social de la SCE, no puedan formar parte del órgano correspondiente de una cooperativa constituida con arreglo al Derecho de dicho Estado miembro; o

- no puedan formar parte del órgano correspondiente de una cooperativa constituida con arreglo al Derecho de un Estado miembro en virtud de resolución judicial o administrativa dictada en un Estado miembro.

3. De conformidad con la legislación del Estado miembro con respecto a las cooperativas, los estatutos de la SCE podrán fijar condiciones particulares para poder ser elegido miembro del órgano de administración.

Artículo 47

Poder de representación y responsabilidad de la SCE

1. Cuando, con arreglo al apartado 1 del artículo 37 y al apartado 1 del artículo 42, el ejercicio del poder de representación de la SCE frente a terceros se confíe a más de un miembro, dichos miembros ejercerán ese poder colectivamente, salvo que el Derecho del Estado miembro del domicilio social de la SCE permita que los estatutos dispongan otra cosa, en cuyo caso esta cláusula será oponible frente a terceros cuando sea objeto de la publicidad a que se refieren el apartado 5 del artículo 11 y el artículo 12.

2. La SCE quedará obligada frente a terceros por los actos realizados por sus órganos, aun cuando tales actos no se correspondan con el objeto social de esta sociedad, a menos que dichos actos constituyan una extralimitación de los poderes que la legislación del Estado miembro del domicilio social de la SCE confiere o permite conferir a dichos órganos.

No obstante, los Estados miembros podrán establecer que la SCE no quede obligada cuando tales actos sobrepasen los límites del objeto social de la SCE, si ésta prueba que el tercero sabía que el acto sobrepasaba dicho objeto o, habida cuenta de las circunstancias, no podía ignorarlo, quedando entendido que la publicación de los estatutos no constituirá, por sí sola, una prueba.

3. Las limitaciones a los poderes de los órganos de la SCE resultantes de los estatutos o de una decisión de los órganos competentes no se podrán oponer en ningún caso frente a terceros, aunque se hayan publicado.

4. Los Estados miembros podrán estipular que el poder de representación de la SCE pueda ser atribuido por disposición estatutaria a una sola persona o a varias personas que actúen conjuntamente. Dicha legislación podrá establecer la oponibilidad frente a terceros de esta disposición de los estatutos, a condición de que ésta se refiera al poder

general de representación. La oponibilidad frente a terceros de dicha disposición se regirá por lo dispuesto en el artículo 12.

Artículo 48

Operaciones sujetas a autorización

1. Los estatutos de la SCE enumerarán las categorías de operaciones que requieran:
 - en el sistema dual, una autorización del órgano de control o de la asamblea general al órgano de dirección,
 - en el sistema monista, una decisión expresa adoptada por el órgano de administración o una autorización de la asamblea general.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 47.
3. No obstante, los Estados miembros podrán determinar las categorías de operaciones supeditadas a autorización y el órgano a quien corresponde otorgarla que deban figurar, como mínimo, en los estatutos de las SCE registradas en su territorio, y establecer, en el sistema dual, que el propio órgano de control pueda determinar las categorías de operaciones que requieran autorización.

Artículo 49

Confidencialidad

Los miembros de los órganos de una SCE estarán obligados a no divulgar, incluso después del cese en sus funciones, las informaciones de que dispongan sobre la SCE cuya divulgación pudiera tener consecuencias perjudiciales para los intereses de la cooperativa o los de sus socios, con excepción de los supuestos en que dicha divulgación sea exigida o esté permitida por las disposiciones de Derecho nacional aplicables a las cooperativas o sociedades, o por causa de interés público.

Artículo 50

Decisiones de los órganos

1. Salvo en los casos en que el presente Reglamento o los estatutos dispongan otra cosa, las normas internas relativas al quórum y a la toma de decisiones de los órganos de la SCE serán las siguientes:
 - a) quórum: al menos la mitad de los miembros con derecho de voto deberán estar presentes o representados;
 - b) toma de decisiones: se hará por mayoría de los miembros con derecho de voto presentes o representados.Los miembros ausentes podrán participar en los acuerdos dando un poder de representación a otro miembro del órgano o a los suplentes que hayan sido designados al mismo tiempo para representarlos.
2. A falta de disposición estatutaria al respecto, el presidente de cada órgano tendrá voto de calidad en caso de empate. No obstante, no podrá existir ninguna disposición estatutaria en sentido contrario cuando la mitad del órgano de control esté compuesta por representantes de los trabajadores.
3. Cuando la participación de los trabajadores esté organizada con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2003/72/CE, los Estados miembros podrán disponer que el quórum y la toma de decisiones del órgano de control queden sujetos, no obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, a las normas aplicables, en las mismas condiciones, a las cooperativas constituidas con arreglo al Derecho del Estado miembro de que se trate.

Artículo 51

Responsabilidad civil

Los miembros del órgano de dirección, de control o de administración responderán, según las disposiciones aplicables a las cooperativas del Estado miembro donde esté domiciliada la SCE, del perjuicio sufrido por la SCE debido al incumplimiento por parte de éstos de las obligaciones legales, estatutarias o de cualquier otro tipo inherentes a sus funciones.

Sección 4

Asamblea general

Artículo 52

Competencia

La asamblea general decidirá en aquellos asuntos respecto a los cuales le confieren competencias específicas:

- a) el presente Reglamento;
- b) las disposiciones de la legislación del Estado miembro en que tenga su domicilio social la SCE, adoptadas en aplicación de la Directiva 2003/72/CE.

La asamblea general decidirá asimismo en aquellos asuntos respecto de los cuales se confiera competencia a la asamblea general de una cooperativa a la que se aplique el Derecho del Estado miembro en que se encuentre el domicilio social de la SCE, ya sea en virtud de la legislación de dicho Estado miembro, ya sea con arreglo a estatutos conformes a ésta.

Artículo 53

Desarrollo de la asamblea general

Sin perjuicio de las normas previstas en la presente sección, la organización y desarrollo de la asamblea general, así como sus procedimientos de votación, se regirán por la legislación aplicable a las cooperativas del Estado miembro del domicilio social de la SCE.

Artículo 54

Convocatoria de la asamblea general

1. La asamblea general se reunirá al menos una vez cada año civil, dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio, excepto en caso de que la legislación del Estado miembro del domicilio social de la SCE aplicable a las cooperativas que ejerzan el mismo tipo de actividad que la SCE establezca una frecuencia mayor. No obstante, los Estados miembros podrán disponer que la primera asamblea general pueda reunirse dentro de los 18 meses siguientes a la constitución de la SCE.
2. La asamblea general podrá ser convocada en todo momento por el órgano de dirección o de administración, el órgano de control o cualquier otro órgano o autoridad competente, con arreglo a la legislación nacional aplicable a las cooperativas del Estado miembro del domicilio de la SCE. El órgano de dirección deberá convocar una asamblea general cuando así lo solicite el órgano de control.
3. El orden del día de la asamblea general que se celebre tras el cierre del ejercicio incluirá, como mínimo, la aprobación de las cuentas anuales y la aplicación de los resultados.
4. La asamblea general podrá acordar, en el curso de una asamblea, que se convoque una nueva asamblea en la fecha y con el orden del día que ella misma establezca.

Artículo 55

Convocatoria por una minoría de socios

Podrá solicitar a la SCE la convocatoria de una asamblea general, y fijar el orden del día de la misma, cualquier grupo de socios integrado por más de 5000 socios o que posea al menos el 10 % del total de los votos. Los estatutos podrán reducir estas cifras.

Artículo 56

Forma y plazo de convocatoria

1. La convocatoria de la asamblea general se realizará mediante el envío de cualquier medio de comunicación escrito a todas las personas facultadas para participar en la asamblea general de la SCE con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 58 y de conformidad con las disposiciones estatutarias. La convocatoria podrá realizarse mediante publicación en el boletín oficial interno de la SCE.

2. En la convocatoria constarán, como mínimo, las siguientes menciones:

- denominación social y domicilio de la SCE,
- lugar, fecha y hora de la asamblea,
- en su caso, carácter de la asamblea general,
- orden del día, indicando los asuntos que deben examinarse y las propuestas de acuerdo.

3. Entre la fecha de envío de la convocatoria contemplada en el apartado 1 y la fecha de la primera reunión de la asamblea general deberá mediar un plazo mínimo de 30 días. No obstante, el plazo podrá reducirse a 15 días en caso de urgencia. En caso de que sea aplicable lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 61 en relación con las normas de quórum, podrá reducirse el tiempo que deberá transcurrir entre la primera y la segunda convocatoria de asamblea con el mismo orden del día de conformidad con la legislación del Estado miembro en que la SCE tenga su domicilio social.

Artículo 57

Inclusión de nuevos puntos en el orden del día

Podrá solicitar la inclusión de uno o más puntos adicionales en el orden del día de una asamblea general cualquier grupo de socios de la SCE integrado por más de 5000 socios o que posea al menos el 10 % del total de los votos. Los estatutos podrán reducir estas magnitudes.

Artículo 58

Participación y representación

1. Todos los socios tendrán voz y voto en la asamblea en relación con los puntos del orden del día.

2. Podrán asistir a la asamblea general sin derecho de voto los miembros de los órganos de la SCE, los tenedores de títulos distintos de las participaciones y de obligaciones tal como se definen en el artículo 64 y, si lo permiten los estatutos, cualquier otra persona habilitada para ello por la legislación del Estado del domicilio de la SCE.

3. Las personas con derecho de voto podrán hacerse representar en la asamblea general por un mandatario, con arreglo a las modalidades previstas en los estatutos.

Se fijará en los estatutos el número máximo de poderes que puede recibir un mandatario.

4. Los estatutos podrán autorizar el voto por correspondencia o el voto electrónico y fijarán sus modalidades.

Artículo 59

Derecho de voto

1. Cada socio de la SCE dispondrá de un voto, independientemente del número de participaciones que posea.

2. Si lo permite la legislación del Estado miembro en el que la SCE tenga su domicilio social, los estatutos podrán estipular que el número de votos de un socio esté determinado por su participación en la actividad cooperativa por medios distintos de la aportación de capital. Los votos así atribuidos no podrán exceder de cinco por socio ni representar más del 30 % del total de derechos de voto.

Si lo permite la legislación del Estado miembro en el que la SCE tenga su domicilio social, los estatutos de las SCE que realicen actividades financieras o de seguros podrán estipular que el número de votos de un socio esté determinado por su participación en la actividad cooperativa, incluida su participación en el capital de la SCE. Los votos así atribuidos no podrán exceder de cinco ni representar más del 20 % del total de derechos de voto.

En el caso de las SCE cuyos socios sean mayoritariamente cooperativas, los estatutos podrán disponer, si lo permite la legislación del Estado miembro en el que la SCE tenga su domicilio social, que el número de votos de un socio esté determinado por su participación en la actividad cooperativa, incluida su participación en el capital de la SCE, o por el número de socios de cada entidad participante, o bien por ambos factores.

3. Por lo que respecta a los derechos de voto que los estatutos puedan atribuir a los socios no usuarios (inversores), la SCE estará regulada por la legislación aplicable a las cooperativas del Estado miembro en el que la SCE tenga su domicilio. No obstante, los derechos de voto del conjunto de los socios no usuarios (inversores) no podrán exceder del 25 % del total de los derechos de voto.

4. Si, en el momento de la entrada en vigor del presente Reglamento, la legislación del Estado miembro del domicilio social de la SCE lo permite, los estatutos de la SCE podrán prever la participación de los representantes de los trabajadores en las asambleas generales, sectoriales o de sección, siempre que los representantes de los trabajadores no controlen, en conjunto, más del 15 % del total de los derechos de voto. Esos derechos dejarán de aplicarse en el momento en que la SCE traslade su domicilio social a un Estado miembro cuya legislación no contemple tal participación.

Artículo 60

Derecho de información

1. Cualquier socio que lo solicite en una asamblea general tendrá derecho a que el órgano de dirección o de administración le facilite información sobre las actividades de la SCE que se relacionen con los asuntos respecto de los cuales la asamblea general pueda adoptar un acuerdo, de conformidad con el apartado 1 del artículo 61. En la medida de lo posible, la información se facilitará durante la asamblea general de que se trate.

2. El órgano de dirección o de administración no podrá negarse a facilitar información, excepto cuando:

- pueda causar un perjuicio grave a la SCE,
- sea incompatible con una obligación legal de secreto.

3. Cuando se deniegue la información a un socio, éste podrá solicitar que consten en el acta de la asamblea general su solicitud y el motivo por el que le ha sido denegada.

4. Durante los diez días anteriores a la celebración de la asamblea general que deba pronunciarse sobre el cierre del ejercicio, los socios podrán examinar el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y su anexo, el informe de gestión, las conclusiones de la auditoría de cuentas efectuada por la persona encargada a tal fin y, cuando se trate de una empresa matriz con arreglo a la Directiva 83/349/CEE, las cuentas consolidadas.

Artículo 61

Adopción de acuerdos

1. La asamblea general podrá adoptar acuerdos sobre los puntos que figuren en su orden del día. La asamblea general también podrá deliberar y adoptar acuerdos sobre puntos que hayan sido incluidos en el orden del día por una minoría de socios con arreglo al artículo 57.

2. La asamblea general decidirá por mayoría de los votos válidos emitidos por los socios presentes o representados.

3. Los estatutos fijarán las normas de quórum y de mayoría aplicables a las asambleas generales.

Si los Estatutos contemplan la posibilidad de que una SCE admita socios inversores (no usuarios), o conceda derechos de voto con arreglo al capital aportado a una SCE dedicada a actividades financieras o aseguradoras, deberán estipular también normas especiales de quórum respecto de los socios distintos de aquellos, o de los miembros que tengan derecho de voto con arreglo al capital aportado a una SCE dedicada a actividades financieras o aseguradoras. Los Estados miembros podrán fijar libremente los requisitos mínimos de esas normas especiales de quórum para las SCE con domicilio social en su territorio.

4. La asamblea general que deba pronunciarse sobre una modificación de los estatutos en primera convocatoria únicamente deliberará de forma válida si los socios presentes o representados constituyen como mínimo la mitad del número total de socios inscritos en la fecha de la convocatoria; en segunda convocatoria, con el mismo orden del día, no será necesario ningún quórum especial.

En los casos contemplados en el párrafo primero, la asamblea general decidirá por mayoría de dos tercios de los votos válidos emitidos, salvo que la legislación aplicable a las sociedades cooperativas en el Estado miembro de domicilio social de la SCE exija una mayoría más elevada.

Artículo 62

Acta

1. Se levantará acta de cada reunión de la asamblea general. Dicha acta contendrá como mínimo la siguiente información:

- lugar y fecha de la asamblea,
- objeto de los acuerdos,
- resultado de las votaciones.

2. Se adjuntará al acta la lista de asistentes, los documentos relativos a la convocatoria de la asamblea general y los informes presentados a los socios sobre los puntos del orden del día.

3. El acta y los documentos anejos a la misma deberán conservarse como mínimo durante cinco años. Deberá proporcionarse gratuitamente a cualquier socio que lo solicite una copia del acta y de los documentos anejos, contra reembolso del coste administrativo.

4. El acta estará firmada por el presidente de la asamblea.

Artículo 63

Asambleas sectoriales o de sección

1. Cuando la SCE desarrolle varias actividades distintas, ejerza actividades en más de una unidad territorial o posea varios establecimientos o más de 500 socios, los estatutos podrán prever la celebración de asambleas sectoriales o de sección, cuando así lo permita la legislación del Estado miembro de que se trate. Los estatutos fijarán la división en sectores o secciones y el número de delegados de los mismos.

2. Las asambleas sectoriales o de sección elegirán a sus delegados por un periodo máximo de cuatro años, a menos que se decida su revocación anticipada. Los delegados así designados constituirán la asamblea general de la SCE y representarán dentro de la misma a sus respectivos sectores o secciones, a los que informarán de los acuerdos de la asamblea general. Las disposiciones de la sección 4 del capítulo III se aplicarán a los trabajos de las asambleas sectoriales y de sección.

CAPÍTULO IV

EMISIÓN DE TÍTULOS CON PRIVILEGIOS ESPECÍFICOS

Artículo 64

Títulos distintos de las participaciones y obligaciones que confieren privilegios específicos

1. Los estatutos podrán prever la creación de títulos distintos de las participaciones o de las obligaciones cuyos tenedores no tengan derecho a voto. Dichos títulos podrán ser suscritos por socios o por cualquier persona ajena a la SCE. Su adquisición no conferirá la condición de socio. Los estatutos fijarán asimismo las modalidades de reembolso.

2. Los tenedores de dichos títulos distintos de las participaciones o de las obligaciones podrán gozar de privilegios específicos de conformidad con los estatutos o con las condiciones establecidas en el momento de la emisión de los títulos contemplados en el apartado 1.

3. El valor nominal total de los títulos contemplados en el apartado 1 no podrá superar la cifra que se fije en los estatutos.

4. Sin perjuicio del derecho de asistir a la asamblea general estipulado en el apartado 2 del artículo 58, los estatutos podrán prever la reunión en asamblea especial de tenedores de títulos contemplados en el apartado 1. La asamblea especial podrá emitir un dictamen previo a cualquier decisión de la asamblea general, en relación con los derechos e intereses de los tenedores de títulos contemplados en el apartado 1, el cual será dado a conocer a esta última por medio de sus mandatarios.

El dictamen contemplado en el párrafo primero constará en el acta de la asamblea general.

CAPÍTULO V

APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS

Artículo 65

Reserva legal

1. Sin perjuicio de las disposiciones obligatorias de las legislaciones nacionales, los estatutos determinarán las reglas para el reparto de los excedentes del balance de fin de ejercicio.

2. En caso de que existan tales excedentes, los estatutos deberán prever que, antes de cualquier otra aplicación de los resultados, una parte de los excedentes se destine a la constitución de una reserva legal.

Hasta que esta reserva legal no alcance un importe igual al capital considerado en el apartado 2 del artículo 3, se destinará a su constitución como mínimo el 15 % de los excedentes del balance de fin de ejercicio, una vez deducidas las pérdidas arrastradas de ejercicios anteriores.

3. Los socios salientes no podrán alegar ningún derecho sobre las cantidades destinadas a la constitución de la reserva legal.

Artículo 66

Retorno

Los estatutos podrán prever el pago de un retorno a los socios, en proporción a las operaciones que hayan realizado con la sociedad o a los servicios prestados a ésta.

Artículo 67

Distribución de los excedentes disponibles

1. El saldo excedente disponible después de dotar la reserva legal, en su caso disminuido por los retornos e incrementado con los remanentes de ejercicios anteriores y con las deducciones sobre las reservas, o reducido con los traslados de pérdidas de ejercicios anteriores, constituirá los excedentes distribuibles.

2. La asamblea general a la que corresponda decidir sobre las cuentas del ejercicio estará facultada para distribuir los excedentes en el orden y proporción que fijen los estatutos y, en particular, para:

- constituir un nuevo remanente,
- dotar las reservas legales o estatutarias,
- remunerar los capitales desembolsados y los capitales asimilados, pudiéndose proceder al pago en metálico o por atribución de participaciones.

3. Los estatutos también podrán excluir cualquier distribución.

CAPÍTULO VI

CUENTAS ANUALES Y CUENTAS CONSOLIDADAS

Artículo 68

Cuentas anuales y consolidadas

1. En lo que se refiere a la elaboración de las cuentas anuales y, en su caso, consolidadas, incluido el informe de gestión anejo a las mismas, y a su control y publicidad, la SCE estará sujeta a las disposiciones de la legislación del Estado miembro de su domicilio adoptadas en aplicación de las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE. No obstante, los Estados miembros podrán prever modificaciones de las disposiciones nacionales de desarrollo de estas Directivas a fin de reflejar las particularidades de las cooperativas.

2. Cuando la legislación del Estado miembro del domicilio de la SCE no imponga a las cooperativas una obligación de publicidad análoga a la prevista en el artículo 3 de la Directiva 68/151/CEE, la SCE deberá, como mínimo, tener los documentos relativos a las cuentas anuales en su domicilio, a disposición del público. Para obtener copia de estos documentos bastará una petición. El precio de dicha copia no podrá ser superior a su coste administrativo.

3. La SCE deberá expresar sus cuentas anuales y, en su caso, sus cuentas consolidadas, en la moneda nacional. Las SCE cuyo domicilio social se encuentre fuera de la zona del euro también podrán expresar en euros sus cuentas anuales y, en su caso, sus cuentas consolidadas. En tal caso, el anexo deberá precisar las bases de conversión utilizadas para expresar en euros los elementos de las cuentas que se expresan, o que en su origen se expresaban, en otra moneda.

Artículo 69

Cuentas de las SCE con actividades crediticias o financieras

1. Las SCE que sean entidades de crédito o entidades financieras se regirán, en lo que se refiere a la elaboración de sus cuentas anuales y, en su caso, de sus cuentas consolidadas, incluido el informe de gestión adjunto a las mismas y el control y la publicidad de dichas cuentas, por las normas establecidas en el Derecho nacional del

Estado miembro en que tengan su domicilio social, en aplicación de las Directivas relativas al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio.

2. Las SCE que sean compañías de seguros se registrarán, en lo que se refiere a la elaboración de sus cuentas anuales y, en su caso, de sus cuentas consolidadas, incluido el informe de gestión adjunto a las mismas y el control y la publicidad de dichas cuentas, por las normas establecidas en el Derecho nacional del Estado miembro en que tengan su domicilio social, en aplicación de las Directivas comunitarias.

Artículo 70

Auditoría de cuentas

La auditoría de las cuentas anuales y, en su caso, consolidadas de la SCE será efectuado por una o varias personas habilitadas al efecto en el Estado miembro en el que la SCE tenga su domicilio, de conformidad con las disposiciones adoptadas por dicho Estado en aplicación de las Directivas 84/253/CEE y 89/48/CEE.

Artículo 71

Sistema de auditoría

Cuando el Derecho de un Estado miembro exija a todas las sociedades cooperativas, o a ciertos tipos de sociedades cooperativas, reguladas por el Derecho de dicho Estado que se adhieran a un órgano externo autorizado y se sometan a una forma específica de auditoría, ejercida por dicho órgano, las disposiciones serán jurídicamente aplicables a las SCE con domicilio en dicho Estado miembro, siempre que dicho órgano se ajuste a los requisitos de la Directiva 84/253/CEE.

CAPÍTULO VII

DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, INSOLVENCIA Y SUSPENSIÓN DE PAGOS

Artículo 72

Disolución, insolvencia y procedimientos análogos

En lo referente a la disolución, liquidación, insolvencia, suspensión de pagos y procedimientos análogos, la SCE estará sometida a las disposiciones legales aplicables a las cooperativas constituidas con arreglo a la legislación del Estado miembro en el que tenga su domicilio social la SCE, incluidas las disposiciones relativas a la adopción de decisiones por la asamblea general.

Artículo 73

Disolución por resolución judicial o de otra autoridad del Estado miembro del domicilio

1. A petición de cualquier persona que tenga un interés legítimo o de una autoridad competente, la autoridad judicial o cualquier autoridad administrativa competente del Estado miembro del domicilio social de la SCE deberá declarar la disolución de esta última cuando compruebe que se han infringido las disposiciones del apartado 1 del artículo 2 o del apartado 2 del artículo 3 y en los casos contemplados en el artículo 34.

La autoridad judicial o la autoridad administrativa competente podrá conceder un plazo a la SCE para que regularice su situación. Si no se efectúa la regularización dentro de este plazo, la autoridad judicial o la autoridad administrativa competente ordenará la disolución.

2. Cuando una SCE deje de cumplir la obligación a que se refiere el artículo 6, el Estado miembro en que tenga su domicilio social la SCE adoptará las medidas apropiadas para obligar a esta última a regularizar la situación en un plazo determinado:

- bien restableciendo su administración central en el Estado miembro del domicilio, bien
- trasladando el domicilio social mediante el procedimiento previsto en el artículo 7.

3. El Estado miembro del domicilio social de la SCE adoptará las medidas necesarias para garantizar que se proceda a liquidar aquellas SCE que no regularicen su situación de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.
4. El Estado miembro del domicilio social de la SCE establecerá un recurso jurisdiccional o de otro tipo adecuado contra cualquier acto de infracción del artículo 6. Dicho recurso tendrá un efecto suspensivo sobre los procedimientos previstos en los apartados 2 y 3.
5. Cuando se compruebe, bien por iniciativa de las autoridades, bien por iniciativa de cualquier parte interesada, que una SCE tiene su administración central en el territorio de un Estado miembro en infracción del artículo 6, las autoridades de dicho Estado miembro informarán de ello sin demora al Estado miembro en el que se encuentre el domicilio social.

Artículo 74

Publicidad de la disolución

La apertura de un procedimiento de disolución, incluidas la disolución voluntaria, la liquidación, la insolvencia o la suspensión de pagos, así como el cierre del mismo y la decisión de continuación de la actividad, se publicarán conforme a lo dispuesto en el artículo 12, sin perjuicio de las disposiciones de Derecho nacional que impongan medidas adicionales de publicidad.

Artículo 75

Adjudicación del activo

El activo neto se adjudicará con arreglo al principio de adjudicación desinteresada o, cuando lo permita la legislación del Estado miembro del domicilio social de la SCE, por un sistema alternativo estipulado en los estatutos de la SCE. A los efectos del presente artículo, se entiende por activo neto el activo que quede tras el pago de todos los importes adeudados a los acreedores y el reembolso de las aportaciones dinerarias de los socios.

Artículo 76

Transformación en cooperativa

1. La SCE podrá transformarse en cooperativa sujeta al ordenamiento jurídico del Estado miembro de su domicilio social. La decisión relativa a la transformación no podrá adoptarse antes de que hayan transcurrido dos años desde su inscripción en el registro ni antes de que hayan sido aprobadas las dos primeras cuentas anuales.
2. La transformación de una SCE en cooperativa no dará lugar ni a disolución ni a creación de una nueva persona jurídica.
3. El órgano de dirección o de administración de la SCE elaborará un proyecto de transformación y un informe que explique y justifique sus aspectos jurídicos y económicos así como sus efectos sobre el empleo, y que indique las consecuencias para socios y titulares de los títulos del artículo 14, así como para los trabajadores, de la adopción de la forma de cooperativa.
4. El proyecto de transformación se hará público de conformidad con las modalidades previstas por la legislación de cada Estado miembro, por lo menos un mes antes de la fecha en la que se reúna la asamblea general convocada para pronunciarse sobre la transformación.
5. Antes de que se celebre la asamblea general indicada en el apartado 6, uno o varios expertos independientes designados o autorizados, con arreglo a las disposiciones nacionales, por una autoridad judicial o administrativa del Estado miembro del que dependa la SCE que se transforme en cooperativa, certificarán que la misma dispone de activos correspondientes por lo menos al capital.

6. La asamblea general de la SCE aprobará el proyecto de transformación, así como los estatutos de la cooperativa. La decisión de la asamblea general deberá tomarse en las condiciones que establezca la legislación nacional.

CAPÍTULO VIII

DISPOSICIONES ADICIONALES Y TRANSITORIAS

Artículo 77

Unión económica y monetaria

1. Cada Estado miembro, en tanto no le sea aplicable la tercera fase de la unión económica y monetaria (UEM), podrá aplicar a las SCE con domicilio social en su territorio las mismas disposiciones que se apliquen a las sociedades anónimas sometidas a su ordenamiento jurídico por lo que se refiere a la denominación de su capital. En cualquier caso, la SCE también podrá expresar su capital en euros. En tal caso, el tipo de cambio entre la moneda nacional y el euro será el del último día del mes anterior a la constitución de la SCE.

2. Si en el Estado miembro del domicilio social de la SCE, no se aplica la tercera fase de la UEM o hasta tanto esta no se aplique, la SCE podrá, no obstante, confeccionar y publicar sus cuentas anuales y, en su caso, consolidadas en euros. El Estado miembro podrá disponer que las cuentas anuales y, en su caso, las cuentas consolidadas de la SCE se elaboren y se publiquen en moneda nacional, en las mismas condiciones que fije para las cooperativas y sociedades anónimas sujetas a su ordenamiento interno. Ello no afectará a la posibilidad adicional de que una SCE publique sus cuentas anuales y, en su caso, sus cuentas consolidadas en euros, de conformidad con la Directiva 90/604/CEE del Consejo, de 8 de noviembre de 1990, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo, sobre las cuentas anuales y las cuentas consolidadas respectivamente, en lo relativo a las excepciones en favor de las pequeñas y medianas sociedades, así como a la publicación de las cuentas anuales en ecus(20).

CAPÍTULO IX

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 78

Normas nacionales de ejecución

1. Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones adecuadas para garantizar la aplicación efectiva del presente Reglamento.

2. Cada Estado miembro designará las autoridades competentes en el sentido de los artículos 7, 21, 29, 30, 54 y 73. Informará de ello a la Comisión y a los demás Estados miembros.

Artículo 79

Revisión del Reglamento

A más tardar cinco años después de la entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre su aplicación, junto con propuestas de modificación, si procede. En particular, el informe analizará la conveniencia de:

a) permitir la radicación de la administración central y del domicilio social de una SCE en diferentes Estados miembros;

b) permitir disposiciones en los estatutos de la SCE adoptadas por un Estado miembro en ejecución de las autorizaciones conferidas a los Estados miembros por el presente Reglamento o leyes adoptadas para velar por la efectiva aplicación del mismo respecto de

la SCE, que se aparten de dichas leyes o las complementen, aun en los casos en que tales disposiciones no se autorizarían en los estatutos de una cooperativa con domicilio social en el Estado miembro;

c) permitir disposiciones que autoricen la escisión de la SCE en dos o más cooperativas nacionales;

d) permitir recursos jurisdiccionales específicos en caso de fraude o de error durante el registro de una SCE constituida mediante fusión.

Artículo 80

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los tres días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Se aplicará a partir del 18 de agosto de 2006.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 22 de julio de 2003.

Por el Consejo

El Presidente

G. Alemanno

(1) DO C 99 de 21.4.1992, p. 17 y DO C 236 de 31.8.1993, p. 17.

(2) DO C 42 de 15.2.1993, p. 75 y Dictamen emitido el 14 de mayo de 2003 (no publicado aún en el Diario Oficial).

(3) DO C 223 de 31.8.1992, p. 42.

(4) DO C 128 de 16.5.1983, p. 51.

(5) DO C 246 de 14.9.1987, p. 94.

(6) DO C 158 de 26.6.1989, p. 380.

(7) DO C 61 de 28.2.1994, p. 231.

(8) DO C 313 de 12.10.1998, p. 234.

(9) DO L 294 de 10.11.2001, p. 1.

(10) DO L 199 de 31.7.1985, p. 1.

(11) Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 88a sesión plenaria, el 19 de diciembre de 2001 (A/RES/56/114).

(12) Véase la página 25 del presente Diario Oficial.

(13) DO L 65 de 31.7.1968, p. 8; Directiva cuya última modificación la constituye el Acta de Adhesión de España y de Portugal.

(14) DO L 222 de 14.8.1978, p. 11; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/65/CE (DO L 283 de 27.10.2001, p. 28).

(15) DO L 193 de 18.7.1983, p. 1; Directiva cuya última modificación la constituyen la Directiva 2001/65/CE.

(16) DO L 126 de 12.5.1984, p. 20.

(17) DO L 395 de 30.12.1989, p. 36.

(18) DO L 372 de 31.12.1986; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/65/CE.

(19) DO L 228 de 11.8.1992, p. 1; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2002/13/CE (DO L 77 de 20.3.2002, p. 17).

(20) DO L 317 de 16.11.1990, p. 57.

• **Directiva 2003/72/CE del Consejo**
de 22 de julio de 2003
por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea (SCE) en lo que respecta a la implicación de los trabajadores

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 308,
Vista la propuesta de la Comisión(1),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo(2),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(3),
Considerando lo siguiente:

(1) Para alcanzar los objetivos que establece el Tratado, el Consejo mediante el Reglamento (CE) n° 1435/2003(4) aprobó el Estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE).

(2) Dicho Reglamento está destinado a establecer un marco jurídico uniforme en el que las cooperativas y demás entidades y personas físicas de los distintos Estados miembros puedan planear y llevar a cabo la reestructuración de sus actividades, en forma de cooperativa, a escala comunitaria.

(3) Para fomentar los objetivos sociales de la Comunidad deben fijarse disposiciones especiales, sobre todo en el ámbito de la implicación de los trabajadores, encaminadas a garantizar que la constitución de una SCE no suponga la desaparición ni la reducción de las prácticas existentes de implicación de los trabajadores en las entidades que participen en la creación de la SCE. Ese objetivo debe perseguirse mediante el establecimiento de una serie de normas aplicables en este ámbito, que completen las disposiciones del Reglamento (CE) n° 1435/2003.

(4) Dado que los objetivos de la acción pretendida no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ya que, como se ha indicado, se trata de establecer una normativa sobre la implicación de los trabajadores en la SCE, y que, por razones de escala y del impacto de la acción propuesta, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad podría adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(5) La gran diversidad de normas y de prácticas existentes en los Estados miembros respecto de la forma en que los representantes de los trabajadores participan en las decisiones de las cooperativas no aconseja que se establezca un modelo europeo único de implicación de los trabajadores aplicable a las SCE.

(6) En todos los casos de constitución de SCE deberán asegurarse los procedimientos de información y consulta a escala transnacional, con la necesaria adaptación de las SCE de nueva constitución cuya dimensión, medida en términos de puestos de trabajo, lo justifique.

(7) Cuando en una o más de las entidades participantes en una SCE existan derechos de participación, dichos derechos deben preservarse, en principio, mediante su transferencia a la SCE, una vez creada ésta, salvo que las partes decidan lo contrario.

(8) Los procedimientos concretos de información y consulta transnacional y, en su caso, de participación de los trabajadores aplicables a cada SCE deberán definirse principalmente mediante un acuerdo entre las partes afectadas o, a falta de éste, mediante la aplicación de una serie de normas subsidiarias.

(9) Los Estados miembros deben poder decidir no aplicar las disposiciones de referencia relativas a la participación en caso de fusión, teniendo en cuenta la diversidad de los

sistemas nacionales de implicación de los trabajadores. El mantenimiento de los sistemas y las prácticas de participación existentes en su caso a nivel de las entidades participantes debe en dicho caso garantizarse mediante una adaptación de las normas de registro.

(10) Las reglas de voto de la comisión que represente a los trabajadores a efectos de la negociación, sobre todo a la hora de celebrar acuerdos que establezcan un nivel de participación más bajo que el existente en una o varias de las entidades participantes, deben estar en relación con el riesgo de desaparición o de reducción de los sistemas y las prácticas de participación existentes. Ese riesgo es mayor cuando se trata de una SCE constituida mediante transformación o fusión que en el caso de la creación de una nueva SCE.

(11) A falta de un acuerdo en la negociación entre los representantes de los trabajadores y los órganos competentes de las entidades participantes, deben disponerse determinadas disposiciones de referencia aplicables a las SCE desde su constitución. Dichas disposiciones de referencia deberán garantizar la existencia de prácticas eficaces de información y consulta transnacional a los trabajadores, así como la participación de éstos en los órganos correspondientes de la SCE, si dicha participación existía en las entidades participantes antes de la constitución de la SCE.

(12) Cuando no se justifique aplicar los procedimientos mencionados a las entidades que participen en la constitución de una nueva SCE a causa de su reducida dimensión, medida en términos de puestos de trabajo, la SCE deberá estar sometida a las disposiciones nacionales en materia de implicación de los trabajadores vigentes en el Estado miembro en el que esté establecido su domicilio social o en los Estados miembros en los que posea filiales o establecimientos. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la obligación impuesta a una SCE de aplicar dichos procedimientos cuando así lo requiera un número significativo de sus empleados.

(13) Deberían aplicarse disposiciones específicas sobre la participación de los trabajadores en las asambleas generales, siempre que así lo permitan las legislaciones nacionales. La aplicación de dichas disposiciones no descarta la aplicación de otras formas de participación previstas en la presente Directiva.

(14) Los Estados miembros deberían asegurarse, mediante las disposiciones oportunas, de que, en caso de cambios estructurales consecutivos a la creación de una SCE, puedan volver a negociarse, si procede, los acuerdos relativos a la implicación de los trabajadores.

(15) Debe preverse que los representantes de los trabajadores que actúen en el marco de la presente Directiva disfruten en el ejercicio de sus funciones de la misma protección y garantías que las previstas para los representantes de los trabajadores con arreglo a la legislación o la práctica del país en que trabajen. No deben ser objeto de discriminación alguna, incluido el acoso, como resultado del ejercicio legal de sus actividades, y deben tener una protección adecuada contra el despido y otras sanciones.

(16) Debe garantizarse que se preserve el carácter confidencial de la información sensible, incluso después de la expiración del mandato de los representantes de los trabajadores. Debe contemplarse una disposición que permita al órgano competente de la SCE no divulgar aquella información que pudiera dañar gravemente el funcionamiento de la SCE en caso de hacerse pública.

(17) Cuando una SCE y sus filiales y establecimientos se hallen sujetos a la Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria(5), las disposiciones de esa Directiva, así como las disposiciones que la incorporen a la legislación nacional no

deben aplicarse ni a la SCE ni a sus filiales y establecimientos, salvo que la comisión negociadora decida no iniciar negociaciones o poner fin a las negociaciones ya iniciadas.

(18) Lo dispuesto en la presente Directiva no debe afectar a otros derechos existentes en materia de implicación de los trabajadores ni afecta necesariamente a otras estructuras de representación existentes establecidas por legislaciones y prácticas comunitarias y nacionales.

(19) Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas en caso de incumplimiento de las obligaciones que establece la presente Directiva.

(20) El Tratado no prevé para la adopción de la presente Directiva por parte de la Comunidad más poderes que los del artículo 308.

(21) La protección de los derechos adquiridos de los trabajadores en materia de implicación en las decisiones de la empresa es un principio fundamental y un objetivo declarado de la presente Directiva. Los derechos de los trabajadores existentes con anterioridad a la constitución de las SCE representan también un punto de partida para la configuración de su derecho a la implicación en la SCE (principio de antes y después). Esta consideración es válida en consecuencia no sólo para la nueva constitución de una SCE sino también para las modificaciones estructurales de una SCE ya constituida y para los procesos estructurales de modificación de las entidades de que se trate. En consecuencia, en caso de traslado de un Estado miembro a otro del domicilio social de una SCE debería seguir aplicándose como mínimo el mismo nivel de derechos en materia de implicación de los trabajadores. Asimismo, si los límites en materia de los trabajadores se alcanzan o se superan tras el registro de una SCE, dichos derechos deberían aplicarse de la misma manera en la que se habrían aplicado de haberse alcanzado o superado los límites antes del registro.

(22) Los Estados miembros podrán prever que los representantes sindicales puedan ser miembros de una comisión negociadora independientemente de que sean o no trabajadores de una entidad que participe en la constitución de una SCE. En este contexto, los Estados miembros, deberían poder reconocer este derecho, en particular, en los casos en que los representantes sindicales tengan derecho de participación y de voto en los órganos de administración o de control de la sociedad, de conformidad con la legislación nacional.

(23) En varios Estados miembros la implicación de los trabajadores, así como otros aspectos de las relaciones laborales, se basan tanto en la legislación como en la práctica nacionales, que, en este contexto, se considera que abarcan también los convenios colectivos a diferentes niveles, nacional, sectorial o de empresa.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objetivo

1. La presente Directiva regula la implicación de los trabajadores en las sociedades cooperativas europeas, denominadas en lo sucesivo "SCE", contempladas en el Reglamento (CE) n° 1435/2003.

2. A tal fin se establecerán disposiciones sobre la implicación de los trabajadores en cada SCE según el procedimiento de negociación previsto en los artículos 3 a 6 o, en las circunstancias contempladas en los artículos 7 y 8, de conformidad con lo dispuesto en el anexo.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

- a) "SCE": toda sociedad cooperativa constituida con arreglo al Reglamento (CE) n° 1435/2003;
- b) "entidades jurídicas participantes": las sociedades con arreglo al segundo párrafo del artículo 48 del Tratado, incluidas las cooperativas, así como las entidades jurídicas constituidas con arreglo a la legislación de un Estado miembro y regidas por ella, que participen directamente en la constitución de una SCE;
- c) "filial de una entidad jurídica participante o de una SCE": una empresa sobre la cual dicha entidad jurídica o SCE ejerce una influencia dominante definida con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 a 7 del artículo 3 de la Directiva 94/45/CE;
- d) "filial o establecimiento afectado": una filial o establecimiento de una entidad jurídica participante que según el proyecto vaya a pasar a ser filial o establecimiento de la SCE en el momento de su constitución;
- e) "representantes de los trabajadores": los representantes de los trabajadores previstos en las legislaciones o en las prácticas nacionales;
- f) "órgano de representación": el órgano de representación de los trabajadores constituido mediante los acuerdos contemplados en el artículo 4 o con arreglo a lo dispuesto en el anexo, para llevar a cabo la información y consulta de los trabajadores de la SCE y de sus filiales y establecimientos situados en la Comunidad y, en su caso, para ejercer los derechos de participación relativos a la SCE;
- g) "comisión negociadora": el grupo constituido con arreglo al artículo 3 a fin de negociar con el órgano competente de las entidades jurídicas participantes el establecimiento de las disposiciones relativas a la implicación de los trabajadores en la SCE;
- h) "implicación de los trabajadores": la información, la consulta y la participación, y cualquier otro mecanismo mediante el cual los representantes de los trabajadores pueden influir en las decisiones que se adopten en la empresa;
- i) "información": la transmisión, por el órgano competente de la SCE al órgano de representación de los trabajadores o a los representantes de los trabajadores, de las informaciones relativas a las cuestiones que afecten a la propia SCE y a cualquiera de sus filiales o establecimientos situados en otro Estado miembro o que excedan de las competencias de los órganos de decisión en un único Estado miembro, en un momento, de un modo y con un contenido que permitan a los representantes de los trabajadores evaluar en profundidad las posibles repercusiones y, en su caso, preparar la consulta con el órgano competente de la SCE;
- j) "consulta": la apertura de un diálogo y el intercambio de opiniones entre el órgano de representación de los trabajadores o los representantes de los trabajadores y el órgano competente de la SCE, en un momento, de un modo y con un contenido que permitan a los representantes de los trabajadores, a partir de la información facilitada, expresar una opinión sobre las medidas previstas por el órgano competente que pueda ser tenida en cuenta en el marco del proceso de toma de decisiones en la SCE;
- k) "participación": la influencia del órgano de representación de los trabajadores o los representantes de los trabajadores en una entidad jurídica mediante:
 - el derecho de elegir o designar a determinados miembros del órgano de administración o de control de la entidad jurídica, o bien
 - el derecho de recomendar u oponerse a la designación de una parte o de todos los miembros del órgano de administración o de control de la entidad jurídica.

SECCIÓN II

PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN APLICABLE A LAS SCE ESTABLECIDAS POR AL MENOS DOS ENTIDADES JURÍDICAS ASÍ COMO MEDIANTE TRANSFORMACIÓN

Artículo 3

Constitución de la comisión negociadora

1. Cuando los órganos de dirección o de administración de las entidades jurídicas participantes establezcan el proyecto de constitución de una SCE, iniciarán lo antes posible las gestiones necesarias, incluida la comunicación de información sobre la identidad de las entidades jurídicas filiales y establecimientos afectados y el número de sus trabajadores, para entablar negociaciones con los representantes de los trabajadores de las entidades jurídicas sobre las disposiciones relativas a la implicación de los trabajadores en la SCE.

2. A tal fin, se constituirá una comisión negociadora representativa de los trabajadores de las entidades jurídicas participantes y sus filiales o establecimientos afectados, con arreglo a las disposiciones siguientes:

a) al elegir o designar los miembros de la comisión negociadora, se deberá garantizar:

i) que sus miembros sean elegidos o designados en proporción al número de trabajadores empleados en cada Estado miembro por las entidades jurídicas participantes y las filiales y establecimientos afectados, a razón en cada Estado miembro de un puesto por cada 10 %, o fracción, de trabajadores empleados en el conjunto de los Estados miembros;

ii) que en el caso de las SCE constituidas mediante fusión, se incorporen otros miembros adicionales en representación de cada Estado miembro en la medida necesaria para garantizar que la comisión negociadora incluye al menos un miembro representante de cada una de las cooperativas participantes que esté registrada y emplee trabajadores en dicho Estado miembro y que, según el proyecto, vaya a dejar de existir como entidad jurídica diferenciada tras la inscripción de la SCE, siempre que:

- el número de estos miembros adicionales no sea superior al 20 % del número de miembros designados de conformidad con el inciso i), y
- la composición de la comisión negociadora no dé lugar a una doble representación de los trabajadores en cuestión.

Si el número de estas cooperativas excede del número de puestos adicionales disponibles con arreglo al primer párrafo, estos puestos adicionales se asignarán a cooperativas de diferentes Estados miembros por orden decreciente del número de trabajadores que empleen;

b) los Estados miembros determinarán la forma de elegir o designar los miembros de la comisión negociadora que hayan de ser elegidos o designados en su territorio. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para lograr que, en la medida de lo posible, entre dichos miembros figure al menos un representante de cada una de las entidades jurídicas participantes que emplee a trabajadores en el Estado miembro afectado. Estas medidas no deberán suponer un aumento del número total de miembros. Los métodos empleados para nombrar, designar o elegir representantes de trabajadores deben procurar el equilibrio de género.

Los Estados miembros podrán prever que entre dichos miembros figuren representantes sindicales, sean o no trabajadores de una entidad jurídica participante o de una filial o establecimiento afectado.

Sin perjuicio de las legislaciones o prácticas nacionales por las que se fijen umbrales para el establecimiento de un órgano de representación de los trabajadores, los Estados miembros deberán prever que los trabajadores de las empresas o establecimientos en los que no existan representantes de los trabajadores por motivos ajenos a su voluntad tengan derecho a elegir o designar a miembros de la comisión negociadora.

3. Corresponderá a la comisión negociadora y a los órganos competentes de las entidades jurídicas participantes fijar, mediante acuerdo escrito, las disposiciones relativas a la implicación de los trabajadores en la SCE.

A tal fin, los órganos competentes de las entidades jurídicas participantes informarán a la comisión negociadora del proyecto y del desarrollo en la práctica del proceso de constitución de la SCE, hasta la inscripción de la misma.

4. Con sujeción a lo dispuesto en el apartado 6, la comisión negociadora decidirá por mayoría absoluta de sus miembros, siempre que dicha mayoría represente igualmente a una mayoría absoluta de los trabajadores. Cada miembro dispondrá de un voto. No obstante, cuando el resultado de las negociaciones pueda dar lugar a una reducción de los derechos de participación, la mayoría necesaria para tomar tal acuerdo será de dos tercios de los miembros de la comisión negociadora, que representen al menos a dos tercios de los trabajadores, incluidos los votos de los miembros que representen a trabajadores contratados en, al menos, dos Estados miembros,

- en el caso de una SCE que vaya a constituirse mediante fusión, si la participación afecta al menos al 25 % del número total de trabajadores de las cooperativas participantes, o

- en el caso de una SCE que vaya a constituirse mediante otro procedimiento, si la participación afecta al menos al 50 % del número total de trabajadores de las entidades jurídicas participantes.

Se entenderá por "reducción de los derechos de participación" una proporción de miembros de los órganos de la SCE, en el sentido de la letra k) del artículo 2, inferior a la proporción más alta existente en las entidades jurídicas participantes.

5. Para las negociaciones, la comisión negociadora podrá solicitar estar asistida por expertos de su elección, por ejemplo representantes de las organizaciones sindicales pertinentes a nivel europeo. Dichos expertos podrán estar presentes, como asesores, durante las reuniones de negociación, cuando así lo solicite la comisión negociadora, en su caso, para promover la coherencia a nivel comunitario. La comisión negociadora podrá decidir informar a los representantes de las organizaciones externas pertinentes, incluidos los sindicatos, acerca del inicio de las negociaciones.

6. La comisión negociadora podrá decidir, por la mayoría prevista en el segundo párrafo, no iniciar negociaciones o terminar las negociaciones ya iniciadas y basarse en las disposiciones sobre información y consulta de los trabajadores que estén vigentes en los Estados miembros en que la SCE tenga trabajadores. Dicha decisión pondrá fin al procedimiento destinado a la adopción del acuerdo previsto en el artículo 4. Cuando se haya tomado dicha decisión, no se aplicará ninguna de las disposiciones del anexo.

La mayoría necesaria para decidir que no se inicien o que se terminen unas negociaciones será la de los dos tercios de los miembros que representen al menos a dos tercios de los trabajadores, incluidos los votos de miembros que representen a trabajadores de al menos dos Estados miembros.

En el caso de una SCE constituida mediante transformación, no será aplicable lo dispuesto en el presente apartado cuando exista participación en la cooperativa que vaya a transformarse.

La comisión negociadora volverá a ser convocada cuando así lo solicite, por escrito, el 10 % por lo menos de los trabajadores de la SCE, de sus filiales y establecimientos o de sus representantes, siempre que hayan transcurrido al menos dos años desde la fecha de la mencionada decisión, salvo que las partes acuerden reiniciar las negociaciones con anterioridad. Si la comisión negociadora decide reanudar las negociaciones con la dirección, pero no se llega a un acuerdo como resultado de dichas negociaciones, no se aplicará ninguna de las disposiciones del anexo.

7. Los gastos de funcionamiento de la comisión negociadora y, en general, de las negociaciones correrán a cargo de las entidades jurídicas participantes de manera que la comisión negociadora pueda cumplir su misión adecuadamente.

Respetando este principio, los Estados miembros podrán fijar las normas relativas a la financiación del funcionamiento de la comisión negociadora. En particular, podrán limitar la financiación a un solo experto.

Artículo 4

Contenido del acuerdo

1. Los órganos competentes de las entidades jurídicas participantes y la comisión negociadora deberán negociar con espíritu de cooperación para llegar a un acuerdo sobre las reglas de implicación de los trabajadores en la SCE.

2. Sin perjuicio de la autonomía de las partes, y con sujeción a lo dispuesto en el apartado 4, el acuerdo mencionado en el apartado 1 entre los órganos competentes de las entidades jurídicas participantes y la comisión negociadora establecerá:

a) el ámbito de aplicación del acuerdo;

b) la composición, el número de miembros y la distribución de los puestos del órgano de representación que será el interlocutor del órgano competente de la SCE en el marco de las disposiciones relativas a la información y consulta de los trabajadores de la SCE y de sus filiales y establecimientos;

c) las atribuciones y el procedimiento previsto de información y consulta al órgano de representación;

d) la frecuencia de las reuniones del órgano de representación;

e) los recursos financieros y materiales que se asignarán al órgano de representación;

f) en caso de que, durante las negociaciones, las partes decidan establecer uno o más procedimientos de información y de consulta en lugar de establecer un órgano de representación, las modalidades de aplicación de tales procedimientos;

g) en caso de que, durante las negociaciones, las partes decidan establecer normas de participación, los aspectos sustanciales de dichas normas, incluido, en su caso, el número de miembros del órgano de administración o de control de la SCE que los trabajadores tendrán derecho a elegir, designar o recomendar o a cuya designación puedan oponerse, los procedimientos que deberán seguir los trabajadores para elegirlos, designarlos, recomendarlos u oponerse a su designación, así como sus derechos;

h) la fecha de entrada en vigor del acuerdo, su duración, los casos en los que el acuerdo deberá renegociarse y el procedimiento para su renegociación, incluyendo, cuando proceda, en caso de cambios estructurales de la SCE y sus filiales y establecimientos que tengan lugar después de la creación de la SCE.

3. El acuerdo no estará sujeto a las disposiciones de referencia establecidas en el anexo, salvo disposición contraria del propio acuerdo.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) del apartado 3 del artículo 15, cuando la SCE se constituya mediante transformación, el acuerdo deberá estipular un nivel de implicación de los trabajadores que sea al menos equivalente al de todos los elementos de implicación existentes en la cooperativa que vaya a transformarse en SCE.

5. El acuerdo podrá especificar las disposiciones para habilitar a los trabajadores a participar en las asambleas generales o en las asambleas de sección o sectoriales, de conformidad con el artículo 9 de la presente Directiva y el apartado 4 del artículo 59 del Reglamento (CE) n° 1435/2003.

Artículo 5

Duración de las negociaciones

1. Las negociaciones se iniciarán tan pronto como se haya constituido la comisión negociadora y podrán proseguir durante los seis meses siguientes.
2. Las partes podrán decidir de común acuerdo prolongar las negociaciones más allá del período contemplado en el apartado 1, hasta un máximo de un año a partir de la constitución de la comisión negociadora

Artículo 6

Legislación aplicable al procedimiento de negociación

Salvo disposición en contrario de la presente Directiva, la legislación aplicable al procedimiento de negociación contemplado en los artículos 3 a 5 será la del Estado miembro en que la SCE vaya a tener su domicilio social.

Artículo 7

Disposiciones de referencia

1. A fin de asegurar la consecución del objetivo descrito en el artículo 1, los Estados miembros establecerán disposiciones de referencia sobre la implicación de los trabajadores, que deberán cumplir las disposiciones previstas en el anexo.

Las disposiciones de referencia previstas por la legislación del Estado miembro en el que vaya a situarse el domicilio social de la SCE se aplicarán a partir de la fecha de inscripción de la SCE:

- a) cuando las partes así lo decidan, o bien
 - b) en el plazo establecido por el artículo 5 cuando no se haya alcanzado ningún acuerdo, y:
 - los órganos competentes de cada una de las entidades jurídicas participantes decidan aceptar la aplicación de las disposiciones de referencia relativas a la SCE y continuar el procedimiento de registro de la SCE, y
 - la comisión negociadora no haya adoptado la decisión prevista en el apartado 6 del artículo 3.
 2. Además, las disposiciones de referencia establecidas por la legislación nacional del Estado miembro de registro con arreglo a la parte 3 del anexo sólo se aplicarán:
 - a) en el caso de una SCE constituida por transformación, si las normas de un Estado miembro relativas a la participación de los trabajadores en el órgano de administración o de control se aplicaban a una cooperativa transformada en SCE;
 - b) en el caso de una SCE constituida por fusión:
 - si, antes de la inscripción de la SCE, se aplicaban una o más formas de participación en una o más de las cooperativas participantes que afectasen al menos al 25 % del número total de trabajadores empleados por ellas, o bien
 - si, antes del registro de la SCE, se aplicaban una o más formas de participación en una o más de las cooperativas participantes que afectasen a menos de un 25 % del número total de trabajadores empleados por ellas y la comisión negociadora así lo decide;
 - c) en el caso de una SCE constituida mediante otro procedimiento:
 - si, antes de la inscripción de la SCE, se aplicaban una o más formas de participación en una o más de las entidades jurídicas participantes que afectasen al menos al 50 % del número total de trabajadores empleados por ellas, o bien
 - si, antes de la inscripción de la SCE, se aplicaban una o más formas de participación en una o más de las entidades jurídicas participantes que afectasen a menos del 50 % del número total de trabajadores empleados por ellas y la comisión negociadora así lo decide.
- Si hubiere más de una forma de participación en el seno de las diferentes entidades jurídicas participantes, la comisión negociadora decidirá cuál de estas formas debe ser

establecida en la SCE. Los Estados miembros podrán fijar las normas aplicables en ausencia de una decisión al respecto para una SCE registrada en su territorio. La comisión negociadora informará a los órganos competentes de las entidades jurídicas participantes de las decisiones adoptadas con arreglo al presente apartado.

3. Los Estados miembros podrán prever que las disposiciones de referencia contempladas en la parte 3 del anexo no se apliquen en el caso previsto en la letra b) del apartado 2.

SECCIÓN III

NORMAS APLICABLES A LAS SCE ESTABLECIDAS EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAS FÍSICAS O POR UNA SOLA ENTIDAD JURÍDICA Y PERSONAS FÍSICAS

Artículo 8

1. En el caso de una SCE establecida exclusivamente por personas físicas o por una sola entidad jurídica y personas físicas, que dé empleo en su conjunto a un mínimo de 50 trabajadores en al menos dos Estados miembros, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 3 a 7.

2. En el caso de una SCE establecida exclusivamente por personas físicas o por una sola entidad jurídica y personas físicas, que dé empleo en su conjunto a menos de 50 trabajadores o que dé empleo a 50 o más trabajadores en un solo Estado miembro, la implicación de los trabajadores se regulará con arreglo a las disposiciones siguientes:

- en la propia SCE, serán de aplicación las disposiciones del Estado miembro en que se encuentre el domicilio social de la SCE que sean aplicables a las entidades del mismo tipo,

- en sus filiales y establecimientos, serán de aplicación las disposiciones del Estado miembro en que estén situados, que sean aplicables a las entidades del mismo tipo.

En caso de traslado de un Estado miembro a otro del domicilio social de una SCE regida por la participación, seguirá siendo de aplicación como mínimo el mismo nivel de derechos de participación de los trabajadores.

3. Se aplicarán, mutatis mutandis, las disposiciones de los artículos 3 a 7 si, con posterioridad al registro de una SCE del tipo contemplado en el apartado 2, así lo solicita al menos un tercio del número total de trabajadores de la SCE y de sus filiales y establecimientos en al menos dos Estados miembros diferentes o si el número total de trabajadores es igual o superior a 50 en al menos dos Estados miembros. En tal caso, las palabras "entidades jurídicas participantes" y "filiales y establecimientos afectados" se sustituirán por "SCE" y "filiales y establecimientos de la SCE", respectivamente.

SECCIÓN IV

PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA GENERAL O EN LA ASAMBLEA DE SECCIÓN O SECTORIAL

Artículo 9

Con sujeción a los límites establecidos en el apartado 4 del artículo 59 del Reglamento (CE) n° 1435/2003, los trabajadores de la SCE y sus representantes estarán habilitados para participar en las asambleas generales o, en caso de que existan, asambleas de sección o sectoriales, con derecho de voto en las circunstancias siguientes:

1) cuando las partes así lo decidan en el acuerdo a que se refiere el artículo 4, o

2) cuando una cooperativa que se rija por un sistema de ese tipo se transforme en una SCE, o

3) en el caso de las SCE que no se hayan constituido por transformación, cuando una de las cooperativas participantes estuviera regida por un sistema de ese tipo, y

- i) las partes no logren alcanzar el acuerdo a que se refiere el artículo 4 en el plazo establecido en el artículo 5, y
- ii) sea de aplicación la letra b) del apartado 1 del artículo 7 y la parte 3 del anexo, y
- iii) la cooperativa participante que se rija por un sistema de ese tipo tuviera en vigor, antes del registro de la SCE, el porcentaje de participación más elevado, en el sentido de la letra k) del artículo 2, dentro de las cooperativas participantes de que se trate.

SECCIÓN V

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 10

Reserva y confidencialidad

1. Los Estados miembros dispondrán que los miembros de la comisión negociadora o del órgano de representación, así como los expertos que les asistan, no estarán autorizados a revelar a terceros la información que les haya sido comunicada con carácter confidencial.

Lo mismo regirá para los representantes de los trabajadores en el marco de un procedimiento de información y consulta.

Esta obligación subsistirá, independientemente del lugar en que se encuentren estas personas, incluso tras la expiración de su mandato.

2. Cada Estado miembro dispondrá que, en casos específicos y en las condiciones y límites establecidos por la legislación nacional, el órgano de control o de administración de una SCE o de una entidad jurídica participante establecida en su territorio no estará obligado a comunicar información que, por su naturaleza, pudiera, según criterios objetivos, crear graves obstáculos al funcionamiento de la SCE (o, en su caso, de una entidad jurídica participante), o de sus filiales y establecimientos u ocasionar perjuicios a los mismos.

Los Estados miembros podrán supeditar esta dispensa a una autorización previa de carácter administrativo o judicial.

3. Cada Estado miembro podrá establecer disposiciones especiales en favor de las SCE establecidas en su territorio que persigan directa y sustancialmente un objetivo de orientación ideológica relativo a la información y a la expresión de opiniones, siempre que en la fecha de adopción de la presente Directiva dichas disposiciones existan ya en la legislación nacional.

4. Los Estados miembros, al proceder a la aplicación de los apartados 1, 2 y 3, preverán los recursos administrativos o judiciales que puedan interponer los representantes de los trabajadores cuando el órgano de control o de administración de la SCE o de una entidad jurídica participante exija confidencialidad o no facilite información.

Estos recursos podrán incluir dispositivos de protección del carácter confidencial de la información de que se trate.

Artículo 11

Funcionamiento del órgano de representación y procedimiento de información y consulta de los trabajadores

El órgano competente de la SCE y el órgano de representación trabajarán con espíritu de cooperación, respetando sus derechos y sus obligaciones recíprocos.

De igual forma se procederá en la cooperación entre el órgano de control o de administración de la SCE y los representantes de los trabajadores en el marco de los procedimientos de información y consulta de los trabajadores.

Artículo 12

Protección de los representantes de los trabajadores

Los miembros de la comisión negociadora, los miembros del órgano de representación, los representantes de los trabajadores que ejerzan sus funciones en el marco de un procedimiento de información y consulta y los representantes de los trabajadores que formen parte del órgano de control o de administración de una SCE que sean trabajadores de la SCE, de sus filiales o establecimientos o de una entidad jurídica participante gozarán, en el ejercicio de sus funciones, de la misma protección y garantías previstas para los representantes de los trabajadores en la legislación o en la práctica nacional vigente en su país de empleo.

Lo anterior se aplicará en particular respecto de la participación en las reuniones de la comisión negociadora o del órgano de representación, en cualquier otra reunión realizada en virtud del acuerdo indicado en la letra f) del apartado 2 del artículo 4 o en cualquier otra reunión del órgano de administración o de control, así como respecto del pago del salario en el caso de los miembros pertenecientes a la plantilla de una entidad jurídica participante o de la SCE o de sus filiales o establecimientos durante los períodos de ausencia necesarios para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 13

Uso indebido de los procedimientos

Los Estados miembros tomarán las medidas apropiadas de acuerdo con el Derecho comunitario para evitar que se haga uso indebidamente de una SCE para privar a los trabajadores de sus derechos de implicación o para denegarles tales derechos.

Artículo 14

Cumplimiento de la presente Directiva

1. Cada Estado miembro velará por que la dirección de los establecimientos de una SCE y los órganos de control o administración de las filiales y de las entidades jurídicas participantes establecidos en su territorio y los representantes de sus trabajadores o, en su caso, los propios trabajadores cumplan las obligaciones establecidas en la presente Directiva, independientemente de que la SCE tenga registrado su domicilio social en su territorio.

2. Los Estados miembros dispondrán medidas adecuadas para el caso de incumplimiento de la presente Directiva; en particular, velarán por la existencia de procedimientos administrativos o judiciales que permitan la ejecución de las obligaciones derivadas de la presente Directiva.

Artículo 15

Relación entre la presente Directiva y otras disposiciones

1. Cuando una SCE sea una empresa de dimensión comunitaria o sea la empresa que ejerce el control de un grupo de empresas de dimensión comunitaria con arreglo a la Directiva 94/45/CE o a la Directiva 97/74/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, por la que se amplía al Reino Unido dicha Directiva(6), no se le aplicarán, ni a ella ni a sus filiales, las disposiciones de dichas Directivas ni las disposiciones que las incorporen a las legislaciones nacionales que les afecten.

No obstante, cuando la comisión negociadora decida, de conformidad con el apartado 6 del artículo 3, no iniciar las negociaciones o poner fin a negociaciones ya iniciadas, se aplicarán la Directiva 94/45/CE o la Directiva 97/74/CE y las correspondientes disposiciones de incorporación a la legislación nacional.

2. Las disposiciones en materia de participación de los trabajadores en los órganos sociales previstas por la legislación o la práctica nacionales distintas de las de aplicación

de la presente Directiva no se aplicarán a las SCE a las que se apliquen los artículos 3 a 7.

3. La presente Directiva no afectará a:

a) los derechos existentes de implicación de los trabajadores, previstos en los Estados miembros por la legislación y/o la práctica nacionales, de que gocen los trabajadores de la SCE y de sus filiales y establecimientos, distintos de la participación en los órganos de la SCE;

b) las disposiciones en materia de participación en los órganos establecidas por la legislación o la práctica nacionales que afecten a las filiales de la SCE ni a las SCE a las que no se apliquen los artículos 3 a 7.

4. Con el fin de salvaguardar los derechos mencionados en el apartado 3, los Estados miembros podrán adoptar las medidas necesarias para garantizar, después de la inscripción de la SCE, el mantenimiento de las estructuras de representación de los trabajadores en las entidades jurídicas participantes que dejen de existir como entidades jurídicas diferenciadas.

Artículo 16

Disposiciones finales

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 18 de agosto de 2006 o garantizarán que, a más tardar en dicha fecha, los interlocutores sociales adopten las disposiciones necesarias mediante acuerdo; los Estados miembros deberán adoptar todas las disposiciones necesarias para poder garantizar en todo momento los resultados que impone la presente Directiva. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

2. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 17

Revisión por parte de la Comisión

A más tardar el 18 de agosto de 2009 la Comisión, en consulta con los Estados miembros y los interlocutores sociales a nivel comunitario, revisará la aplicación de la presente Directiva, con el fin de proponer al Consejo, si fuere necesario, las modificaciones oportunas.

Artículo 18

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 19

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 22 de julio de 2003.

Por el Consejo

El Presidente

G. Alemanno

(1) DO C 236 de 31.8.1993, pág. 36.

(2) DO C 42 de 15.2.1993, pág. 75.

- (3) DO C 223 de 31.8.1992, pág. 42.
- (4) Véase página 1 del presente Diario Oficial.
- (5) DO L 254 de 30.9.1994, p. 64; Directiva modificada por la Directiva 97/74/CE (DO L 10 de 16.1.1998, p. 22).
- (6) DO L 10 de 16.1.1998, p. 22.

ANEXO

DISPOSICIONES DE REFERENCIA

(contempladas en el artículo 7 y en el artículo 8)

Parte 1: Composición del órgano de representación de los trabajadores

A fin de alcanzar el objetivo mencionado en el artículo 1 y en los casos previstos en el artículo 7 de la Directiva, se constituirá un órgano de representación con arreglo a las disposiciones siguientes:

a) El órgano de representación estará compuesto por trabajadores de la SCE y de sus filiales y establecimientos elegidos o designados por y entre los representantes de los trabajadores o, en su defecto, por el conjunto de los trabajadores.

b) La elección o designación de los miembros del órgano de representación se llevará a cabo con arreglo a las legislaciones o prácticas nacionales.

Los Estados miembros adoptarán disposiciones que garanticen que el número de miembros del órgano de representación y la asignación de los puestos se adapten para tener en cuenta los cambios producidos en la SCE, sus filiales y establecimientos. Los métodos empleados para nombrar, designar o elegir representantes de trabajadores deben procurar el equilibrio de género.

c) Si su dimensión lo justifica, el órgano de representación elegirá de entre sus miembros un comité restringido compuesto por un máximo de tres miembros.

d) El órgano de representación aprobará su reglamento interno.

e) Sus miembros serán elegidos o designados en proporción al número de trabajadores empleados en cada Estado miembro por la SCE y sus filiales o establecimientos, a razón en cada Estado miembro de un puesto por cada 10 % o fracción del total de trabajadores empleados por ellos en el conjunto de los Estados miembros.

f) El órgano competente de la SCE estará informado de la composición del órgano de representación.

g) A más tardar cuatro años después de su constitución, el órgano de representación deliberará sobre si deben entablarse o no negociaciones con vistas a la celebración del acuerdo que se menciona en los artículos 4 y 7 de la Directiva o si deben mantenerse vigentes las disposiciones de referencia establecidas con arreglo al presente anexo.

Se aplicarán, mutatis mutandis, los apartados 4 a 7 del artículo 3, y los artículos 4, 5 y 6 de la Directiva, si se decide negociar un acuerdo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva, en cuyo caso la expresión "la comisión negociadora" se sustituirá por la expresión "el órgano de representación". En caso de que no se haya llegado a un acuerdo a la expiración del plazo fijado para la conclusión de las negociaciones, seguirán aplicándose las reglas adoptadas inicialmente conforme a las disposiciones de referencia.

Parte 2: Disposiciones de referencia sobre información y consulta

La competencia y los poderes del órgano de representación constituido en la SCE se regirán por las disposiciones siguientes:

a) La competencia del órgano de representación se limitará a las cuestiones que afecten a la SCE en sí misma y a cualquiera de sus filiales o establecimientos situados en otros Estados miembros o a aquellas que excedan de la competencia de los órganos de decisión en un solo Estado miembro.

b) Sin perjuicio de las reuniones que se celebren en aplicación de la letra c), el órgano de representación tendrá derecho a ser informado y consultado, y, a tal efecto, a reunirse al menos una vez al año con el órgano competente de la SCE, sobre la base de informes periódicos elaborados por el órgano competente, acerca de la evolución y perspectivas de las actividades de la SCE. Se informará a las direcciones locales en consecuencia.

El órgano competente de la SCE proporcionará al órgano de representación los órdenes del día de las reuniones del órgano de administración o, cuando proceda, del órgano de dirección y control, así como copias de todos los documentos presentados a la junta general de sus miembros.

La reunión se referirá en particular a la estructura, la situación económica y financiera, la evolución probable de las actividades, de la producción y de las ventas, iniciativas referentes a la responsabilidad social de las empresas, la situación y la evolución probable del empleo, las inversiones, los cambios sustanciales relativos a la organización, la introducción de nuevos métodos de trabajo o nuevos procesos de producción, los traslados de producción, las fusiones, reducciones de tamaño o cierres de empresas, de establecimientos o de partes importantes de éstos, y los despidos colectivos.

c) Cuando concurren circunstancias excepcionales que afecten de modo considerable a los intereses de los trabajadores, y en particular en los casos de traslados, ventas, cierre de empresas o establecimientos o despidos colectivos, el órgano de representación tendrá derecho a ser informado. El órgano de representación o, cuando así lo decida -en particular, por razones de urgencia- el comité restringido tendrá derecho a reunirse, a petición propia, con el órgano competente de la SCE o con cualquier otro nivel de dirección más adecuado de la SCE que sea competente para adoptar decisiones propias, para que se les informe y consulte sobre las medidas que afecten considerablemente a los intereses de los trabajadores.

Cuando el órgano competente decida no seguir la opinión o el criterio manifestado por el órgano de representación, este último tendrá derecho a reunirse de nuevo con el órgano competente de la SCE a fin de intentar llegar a un acuerdo.

En el caso de una reunión organizada con el comité restringido, los miembros del órgano de representación que representen a los trabajadores directamente afectados por las medidas en cuestión tendrán también derecho a participar.

Las reuniones antes mencionadas no afectarán a las prerrogativas del órgano competente.

d) Los Estados miembros podrán establecer normas sobre la presidencia de las reuniones de información y consulta.

Antes de cualquier reunión con el órgano competente de la SCE, el órgano de representación o el comité restringido, ampliado en caso necesario de conformidad con lo indicado en el tercer párrafo de la letra c), estarán facultados para reunirse sin que estén presentes los representantes del órgano competente.

e) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 de la Directiva, los miembros del órgano de representación informarán a los representantes de los trabajadores de la SCE y de sus filiales y establecimientos acerca del contenido y del resultado de los procedimientos de información y consulta.

f) El órgano de representación o el comité restringido podrán estar asistidos por expertos de su elección.

g) En la medida en que sea necesario para el desempeño de sus funciones, los miembros del órgano de representación tendrán derecho a un permiso de formación sin pérdida de salario.

h) Los gastos de funcionamiento del órgano de representación correrán a cargo de la SCE, que dotará a los miembros del mismo de los recursos financieros y materiales necesarios para que puedan cumplir adecuadamente su cometido.

En particular, la SCE se hará cargo, salvo que se convenga otra cosa, de los gastos de organización de las reuniones y de interpretación, así como de los gastos de alojamiento y viaje de los miembros del órgano de representación y del comité restringido.

Respetando estos principios, los Estados miembros podrán fijar normas relativas a la financiación del funcionamiento del órgano de representación. En particular, podrán limitar la financiación a un solo experto.

Parte 3: Disposiciones de referencia para la participación

La participación de los trabajadores en la SCE se regirá por las disposiciones siguientes

a) En el caso de una SCE constituida por transformación, si las normas de un Estado miembro relativas a la participación de los trabajadores en el órgano de administración o de control eran de aplicación antes de la inscripción, todos los elementos de la participación de los trabajadores continuarán siendo de aplicación en la SCE. La letra b) se aplicará mutatis mutandis a dichos efectos.

b) En los demás casos de constitución de una SCE, los trabajadores de la SCE, de sus filiales y establecimientos o sus órganos de representación tienen derecho a elegir, designar, recomendar u oponerse a la designación de un número de miembros del órgano de administración o de control de la SCE igual a la mayor de las proporciones vigentes en las sociedades participantes de que se trate antes de la inscripción de la SCE.

c) Si ninguna de las entidades jurídicas participantes estuviera regida por las normas de participación antes de la inscripción de la SCE, ésta no estará obligada a establecer disposiciones en materia de participación de los trabajadores.

d) El órgano de representación decidirá sobre el reparto de los puestos en el seno del órgano de administración o de control entre los miembros representantes de los trabajadores de los diferentes Estados miembros, o sobre la forma en que los trabajadores de la SCE pueden recomendar el nombramiento de miembros de estos órganos u oponerse al mismo, en función de la proporción de trabajadores de la SCE empleados en cada Estado miembro. Si los trabajadores de uno o más Estados miembros no están cubiertos por este criterio proporcional, el órgano de representación designará un miembro originario de uno de dichos Estados miembros, en particular del Estado miembro del domicilio social de la SCE cuando ello sea oportuno. Cada Estado miembro podrá determinar la forma de reparto de los puestos que le sean atribuidos en el seno del órgano de administración o de control.

e) Todo miembro del órgano de administración o, en su caso, del órgano de control de la SCE que haya sido elegido, designado o recomendado por el órgano de representación o, según los casos, por los trabajadores, será miembro de pleno derecho, con los mismos derechos y obligaciones que los miembros que representen a los miembros de la cooperativa, incluido el derecho de voto.

4.36. URUGUAY

• LEY 17.794

SE DEFINEN Y SE REGULAN COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN O TRABAJO ASOCIADO

Publicada D.O. 28 jul/004 - Nº 26554

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 1º. - Son cooperativas de producción o trabajo asociado las que se constituyen y están regidas de acuerdo con la Ley N° 10.761, de 15 de agosto de 1946, sus modificativas y complementarias, y tienen por objeto proporcionar a sus asociados puestos de trabajo mediante su esfuerzo personal y directo, a través de una organización conjunta destinada a producir bienes o servicios para terceros, en cualquier sector de la actividad económica. La relación de los socios con la cooperativa es societaria.

Se consideran incluidas en la definición precedente, aquellas cooperativas que sólo tengan por objeto la comercialización en común a terceros de productos o servicios, siempre que sus asociados no tengan trabajadores dependientes y el uso de los medios de producción de propiedad de los asociados, esté afectado exclusivamente al cumplimiento del objeto de la cooperativa, salvo autorización expresa de esta última.

Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente ley, las cooperativas que tengan por objeto la prestación de servicios financieros, y las que realicen la actividad aseguradora de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la Ley N° 16.426, de 14 de octubre de 1993.

Para la realización de actividad que conforme a la regulación vigente se requiere autorización expresa, las cooperativas de trabajo asociado deberán cumplir los requisitos dispuestos por las normas respectivas.

Artículo 2º. (Trabajadores socios y no socios).- Las cooperativas de producción o trabajo asociado se integrarán con un mínimo de seis trabajadores socios.

El número de trabajadores no socios no podrá superar el 20% (veinte por ciento) de los miembros de la cooperativa. En cualquier caso, el mínimo de empleados podrá ser de dos. Estas limitaciones no rigen para los trabajadores contratados para cubrir necesidades cíclicas extraordinarias derivadas de actividades de temporada, según establezca la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

Artículo 3º. (Remuneración de los trabajadores socios).- La remuneración de los trabajadores socios se relaciona con su doble condición. Percibirán como remuneración mensual la equivalente al salario de la rama de actividad económica donde gira la cooperativa, con todos los beneficios sociales que legalmente correspondan.

Asimismo percibirán la cuota parte de los excedentes anuales, en proporción a la cantidad y calidad del trabajo aportado por cada uno durante el ejercicio económico, descontando las remuneraciones percibidas por todo concepto, de acuerdo a lo establecido en el precedente inciso.

Artículo 4º. (Legislación laboral y previsional).- Serán aplicables a todos los trabajadores, tengan o no la calidad de socios, las normas de protección de la legislación laboral y la previsión social, excepto la indemnización por despido a los socios cooperarios excluidos.

Por sus socios trabajadores, las cooperativas no tributarán los aportes jubilatorios patronales a los organismos de previsión social teniendo en cuenta su naturaleza de asociación de trabajadores.

Artículo 5º. (Fomento y tributación).- Las cooperativas de producción o trabajo asociado estarán exoneradas de todo tributo nacional, con excepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuesto Específico Interno (IMESI), del Impuesto de Contribución al Financiamiento de la Seguridad Social (COFIS), del Impuesto Específico a los Servicios de Salud (IMESSA), del Impuesto a las Telecomunicaciones (ITEL), de los aportes al Seguro Social de Enfermedad correspondiente a los trabajadores socios y no socios, y del aporte jubilatorio patronal por los trabajadores dependientes.

Artículo 6º. (Liquidación o cesación de pagos).- En los casos de de empresas privadas a cuyo respecto se haya iniciado un proceso de liquidación, el Juez competente podrá designar depositaria de los bienes de la empresa, confiriendo facultades de uso precario de los mismos a la cooperativa de trabajo que se constituya con la totalidad o parte del personal. A tal efecto, el Juez deberá contar con la conformidad expresa de los órganos de la liquidación y auxiliares de la Justicia que corresponda, según la etapa y características del procedimiento liquidatorio iniciado.

Para la designación a que refiere el inciso anterior la cooperativa deberá justificar su viabilidad -discriminando la que resulte de la actividad de administración que desarrollará- mediante la presentación de un proyecto técnicamente fundado.

Las disposiciones precedentes respetarán los principios y legislación concursal vigente.

En tales casos y a solicitud de parte, el organismo de previsión social podrá disponer el pago al contado y por adelantado de los importes del subsidio por desempleo que les correspondiere a los trabajadores socios, siempre que los mismos sean destinados en su totalidad, como aportación de partes sociales a la cooperativa a efectos de su capitalización.

Artículo 7º. (Declaración interpretativa).- Declárase con carácter interpretativo, que las cooperativas de producción creadas al amparo de la Ley Nº 13.481, de 23 de junio de 1966, quedan comprendidas en las disposiciones de la presente ley a partir de su entrada en vigencia.

Artículo 8º. (Derogación).- Derógase la Ley Nº 13.481, de 23 de junio de 1966, sin perjuicio de mantenerse vigentes los beneficios acordados por el artículo 1º de la Ley Nº 14.019, de 10 de setiembre de 1971, mientras se cumplan los requisitos establecidos en dicha norma.

Sala de Sesiones de la Asamblea General, en Montevideo, a 13 de julio de 2004.

LUIS HIERRO LÓPEZ,

Presidente.

Mario Farachio,

Horacio D. Catalurda,

Secretarios.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Montevideo, 22 de julio de 2004.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 138 de la Constitución de la República, cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.

BATLLE.

ISAAC ALFIE.

SANTIAGO PÉREZ DEL CASTILLO.

- **LEY 17.978**

COOPERATIVAS SOCIALES

SE DEFINE LA LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS MISMAS

Publicada D.O. 3 jul/006 - Nº 27026

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN:

Artículo 1º. (Definición y objeto).- Las cooperativas sociales son aquellas cooperativas de trabajo que tienen por objeto proporcionar a sus miembros un puesto de trabajo para el desarrollo de distintas actividades económicas, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, con el fin de lograr la inserción social y laboral de los jefes y jefas de hogares pertenecientes a sectores con necesidades básicas insatisfechas, jóvenes, discapacitados, minorías étnicas y todo grupo en situación de extrema vulnerabilidad social.

Artículo 2º. (Legislación aplicable).- Las cooperativas sociales se regirán por las disposiciones de la presente ley, y en lo previsto por las disposiciones de las Leyes N° 10.761, de 15 de agosto de 1946; N° 17.794, de 22 de julio de 2004; N° 16.156, de 29 de octubre de 1990, y demás aplicables a las cooperativas de producción o trabajo asociado, y por los principios cooperativos con reconocimiento universal que estén integrados al derecho interno.

Ante cuestiones que no puedan resolverse por la legislación aplicable se deberá recurrir a las soluciones consagradas por los artículos 17 a 20 del Código Civil.

Artículo 3º. (Requisitos).- Para ser calificada como cooperativa social se deberán cumplir los siguientes requisitos:

A) Constará en el Estatuto que en los ejercicios económicos en que existan excedentes luego de cancelados todos los gastos de la cooperativa y las restituciones que le correspondan a los miembros de la cooperativa, aquellos deberán destinarse a crear reservas o a la consolidación y mejora del servicio prestado y en ningún caso serán repartidos entre los socios.

B) También constará en el Estatuto el carácter gratuito del desempeño de todos los cargos de dirección, sin perjuicio de la restitución de gastos que puedan generarse por el cumplimiento de tales funciones.

C) Podrá preverse la actualización del valor de las aportaciones de los socios al capital social por cualquier índice objetivo, el que deberá establecerse en el Estatuto.

D) Las retribuciones de los socios trabajadores y de los trabajadores no socios no podrán superar las retribuciones que, en función de la actividad y categoría profesional, establezca el convenio colectivo aplicable del ramo o el que guarde mayor analogía.

El incumplimiento de los requisitos establecidos en los literales A) y B), impedirá la calificación de cooperativas sociales, y la inobservancia de los mismos, así como el incumplimiento del requisito establecido en el literal D), determinará la pérdida de tal calificación, debiendo acceder a otra modalidad a los efectos de mantener la condición de cooperativa.

Artículo 4º. (Socios).- Podrán ser socios las personas físicas mayores de edad, y las personas menores de edad o incapaces por medio de sus representantes legales, ya sean los padres, tutores o curadores, no requiriéndose en ningún caso autorización judicial.

La administración y representación de la cooperativa deberá ser ejercida por los socios mayores de edad. En el caso en que la cantidad de miembros mayores no sea suficiente para cubrir los cargos de administradores, o que todos los miembros de la cooperativa sean menores de edad o incapaces, podrán éstos ser designados para ejercer la

administración y la representación de la cooperativa, en cuyo caso lo realizarán por medio de sus representantes legales.

Artículo 5º. (Control y registro).- Sin perjuicio del control de legalidad previo y de los demás controles pertinentes establecidos en la legislación vigente, las cooperativas sociales en forma previa a la inscripción de sus estatutos en el Registro de Personas Jurídicas Sección Comercio, deberán ser presentadas al Ministerio de Desarrollo Social, con el fin de que éste verifique si la composición de la cooperativa se corresponde con lo establecido en el artículo 1º y si se cumplen los requisitos previstos en los artículos 3º y 4º de esta ley.

A tales efectos el Ministerio de Desarrollo Social dispondrá de un plazo de treinta días para expedirse.

También este Ministerio tendrá facultades para controlar el cumplimiento de dichos requisitos durante el funcionamiento de la cooperativa, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Artículo 6º. (Formación para la gestión).- Todos los miembros de la cooperativa social recibirán la capacitación en los postulados y principios cooperativos y en los diversos aspectos específicos del rubro en que se desarrolle la actividad productiva, así como la asistencia técnica para la gestión que garantice la viabilidad socioeconómica de los proyectos y que los mismos sean sostenibles.

Artículo 7º. (Fomento).- Se declara de interés general el fomento de las cooperativas sociales. Las mismas quedan exoneradas de todo tributo nacional. Asimismo, estarán exoneradas de todo aporte patronal a la Seguridad Social, incluido el correspondiente al aporte complementario al Seguro de Enfermedad.

Artículo 8º.- Incorpórase al numeral 3) del artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) el siguiente literal:

"S) Para adquirir bienes o contratar servicios cuya producción o suministro esté a cargo de una cooperativa social, debidamente acreditada ante el Ministerio de Desarrollo Social, hasta el monto establecido para la licitación abreviada".

Artículo 9º.- A los efectos del numeral 4) del artículo 43 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), se considerará a las cooperativas sociales que cumplen con los requisitos establecidos en la presente ley, como empresas con solvencia y responsabilidad demostradas.

Artículo 10.- El Ministerio de Desarrollo Social comunicará a los ordenadores de gastos mencionados en el artículo 27, literales A), C), D), E), F) y G), y en el artículo 28, literal A), del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), la nómina de cooperativas sociales presentadas ante el mismo de conformidad con el artículo 3º de esta ley, así como el giro de sus actividades a los efectos de lo establecido en el artículo 48 del TOCAF, así como en otras normas de finalidad similar.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, 14 de junio de 2006.

ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO,
Presidente.

Hugo Rodríguez Filippini,
Secretario.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
Montevideo, 26 de junio de 2006.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ.

ANA OLIVERA.

JOSÉ E. DÍAZ

REINALDO GARGANO

DANILO ASTORI

AZUCENA BERRUTTI

JORGE BROVETTO

VÍCTOR ROSSI

JORGE LEPRÁ

EDUARDO BONOMI

MARÍA JULIA MUÑOZ

JOSÉ MUJICA

HÉCTOR LESCANO

MARIANO ARANA

- **LEY 18.407**
SISTEMA COOPERATIVO
REGULACIÓN GENERAL DE SU FUNCIONAMIENTO

Publicada D.O. 14 nov/008 - N° 27612

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN:

TÍTULO I

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. (Objetivo de la ley).- La presente ley tiene por finalidad regular la constitución, organización y funcionamiento de las cooperativas y del sector cooperativo.

Artículo 2º. (Declaración de interés y autonomía).- Declárase a las cooperativas de interés general e instrumentos eficaces para contribuir al desarrollo económico y social, al fortalecimiento de la democracia y a una más justa distribución de la riqueza.

El Estado garantizará y promoverá la constitución, el libre desarrollo, el fortalecimiento y la autonomía de las cooperativas, en todas sus expresiones económicas y sociales.

Artículo 3º. (Régimen y derecho cooperativo).- Las cooperativas se regirán por las disposiciones de la presente ley y, en general, por el derecho cooperativo. Supletoriamente se regirán por las disposiciones de la ley de sociedades comerciales en lo no previsto y en cuanto sean compatibles.

Derecho cooperativo es el conjunto de normas especiales, jurisprudencia, doctrina y prácticas basadas en los principios que determinan y regulan la actuación de las organizaciones cooperativas y los sujetos que en ellas participan.

Artículo 4º. (Concepto).- Las cooperativas son asociaciones autónomas de personas que se unen voluntariamente sobre la base del esfuerzo propio y la ayuda mutua, para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente gestionada.

Cualquier actividad económica lícita podrá ser organizada y desarrollada mediante una entidad constituida al amparo de la presente ley.

Las cooperativas podrán revestir la forma de cooperativa de primer, segundo y ulteriores grados, de acuerdo con las especificidades previstas en la presente ley.

Artículo 5º. (Denominación).- La denominación de la entidad incluirá necesariamente la palabra "Cooperativa" o su abreviatura "Coop.", con el agregado de la palabra "Suplementada" en los casos en que la responsabilidad de la cooperativa sea tal, e indicará la naturaleza de la actividad principal.

El empleo del vocablo "cooperativa", o el de "cooperación" o sus derivados, ya sea como denominación, marca o nombre comercial, queda prohibido a toda persona que no se ajuste a las disposiciones de la presente ley.

La denominación no podrá ser igual o semejante a la de otra cooperativa preexistente.

Artículo 6º. (Domicilio y sede).- El domicilio de la cooperativa será dentro del territorio nacional, en el lugar donde centralice su gestión administrativa y dirección.

La sede de la cooperativa será la ubicación precisa de su administración dentro del domicilio.

En caso de existir sucursales, podrán tener domicilio y sede propios.

Artículo 7º. (Principios).- Las cooperativas deben observar los siguientes principios:

- 1) Libre adhesión y retiro voluntario de los socios.
- 2) Control y gestión democrática por los socios.
- 3) Participación económica de los socios.
- 4) Autonomía e independencia.
- 5) Educación, capacitación e información cooperativa.
- 6) Cooperación entre cooperativas.
- 7) Compromiso con la comunidad.

Los principios enunciados tendrán los alcances y sentidos reconocidos por el cooperativismo universal.

Dichos principios han de aplicarse al funcionamiento y la organización de las cooperativas, han de incorporarse a las fuentes del derecho cooperativo como principios generales y aportan un criterio de interpretación del derecho cooperativo.

Artículo 8º. (Caracteres).- Las cooperativas deben reunir los siguientes caracteres:

- 1) Ilimitación y variabilidad del número de socios que no podrá ser inferior a cinco, salvo para las cooperativas de segundo o ulterior grado y lo dispuesto en los Capítulos del Título II De las cooperativas en particular, de la presente ley.
- 2) Plazo de duración ilimitado.
- 3) Variabilidad e ilimitación del capital.
- 4) Autonomía en materia política, religiosa, filosófica y no discriminación por nacionalidad, clase social, raza y equidad de género.
- 5) Igualdad de derechos y obligaciones entre los socios.
- 6) Reconocimiento de un solo voto a cada socio, independientemente de sus aportes, excepto la posibilidad del voto ponderado en las cooperativas de segundo o ulterior grado.
- 7) La imposibilidad del reparto de las reservas sociales y el destino desinteresado del sobrante patrimonial en caso de liquidación.

Artículo 9º. (Acto cooperativo).- Son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y sus socios, por éstas y los socios de sus cooperativas socias, o por las cooperativas entre sí cuando estuviesen asociadas bajo cualquier forma o vinculadas por pertenencia a otra de grado superior, en cumplimiento de su objeto social.

Los mismos constituyen negocios jurídicos específicos, cuya función económica es la ayuda mutua, quedan sometidos al derecho cooperativo y para su interpretación se entenderán integrados por las estipulaciones del estatuto social.

Tendrán por objeto la creación, modificación o extinción de obligaciones, negocios dispositivos en sentido amplio o en sentido estricto.

En caso de incumplimiento, la parte a la cual se le incumpla podrá optar entre la ejecución forzada y la resolución o rescisión según corresponda, más daños y perjuicios. Se deberá solicitar judicialmente y el Juez podrá otorgar un plazo de gracia.

En todo lo no previsto en las leyes cooperativas se aplicarán al acto cooperativo los principios generales en materia de negocio jurídico en general y de los contratos en particular, en lo compatible y en cuanto correspondiere o fuere pertinente.

Los vínculos de las cooperativas con sus trabajadores dependientes se rigen por la legislación laboral.

Artículo 10. (Modalidades).- Las cooperativas, de acuerdo al objeto del acto cooperativo, serán de trabajadores, de consumidores (o usuarios) o de trabajadores y consumidores a la vez.

Artículo 11. (Transformación).- Las cooperativas no podrán transformarse en entidades de otra naturaleza, tipología o forma jurídica. Es nula toda resolución en contrario, con la excepción que se establece en el inciso siguiente.

Solamente podrán transformarse en otro tipo de entidad jurídica, cuando a criterio de la Auditoría Interna de la Nación y del Instituto Nacional del Cooperativismo, las circunstancias económicas y financieras de la cooperativa de que se trate indiquen que constituye la única alternativa viable para mantener la continuidad de la unidad productiva y los puestos de trabajo.

La solicitud de transformación deberá provenir de una resolución de la Asamblea General Extraordinaria, adoptada por una mayoría de por lo menos las 3/4 (tres cuartas partes) del total de socios de la cooperativa, y presentarse en la Auditoría Interna de la Nación.

Se deberá contar con la autorización previa y fundada de los dos organismos referidos en el presente artículo para que pueda procederse a la transformación solicitada.

El Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo.

CAPÍTULO II CONSTITUCIÓN

Artículo 12. (Asamblea constitutiva).- Las cooperativas se constituirán por la decisión de una asamblea citada a ese fin, la que aprobará el estatuto, y en la que se suscribirán partes sociales y se elegirá a los miembros de los órganos sociales.

Las resoluciones adoptadas deberán consignarse en documento público o privado, con firmas certificadas notarialmente y debidamente protocolizado, labrándose el acta fundacional en el libro respectivo, que suscribirán Presidente y Secretario.

Artículo 13. (Formalidades y personería jurídica).- La cooperativa será persona jurídica desde la inscripción en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Cooperativas, de la primera copia de la escritura pública o del primer testimonio de la protocolización del documento de constitución y aprobación del estatuto social.

El Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Cooperativas, efectuará el control de legalidad sobre el estatuto social, el que deberá contener las previsiones establecidas en la presente ley.

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, las cooperativas deberán cumplir también con las inscripciones y trámites correspondientes a los efectos de obtener las autorizaciones necesarias para las actividades que desarrollarán.

Artículo 14. (Cooperativas en formación).- Los actos celebrados y los documentos suscritos a nombre de la cooperativa antes de la obtención de su personería jurídica, salvo los necesarios para el trámite ante el Registro, hacen solidariamente responsables a quienes los celebraron o suscribieron por parte de la cooperativa en formación.

Una vez inscripta la cooperativa, dichos actos podrán ser ratificados por ésta. La referida ratificación tendrá efectos retroactivos.

En tanto no se produzca la inscripción registral, la entidad deberá añadir a su denominación las palabras "en formación".

Artículo 15. (Contenido del estatuto).- Respetando las prescripciones de la presente ley, y sin perjuicio de otros elementos que la ley establezca, el estatuto debe contener por lo menos los siguientes:

- 1) Denominación y domicilio.
- 2) Designación precisa del objeto social.
- 3) Régimen de responsabilidad.
- 4) Capital inicial y valor de las partes sociales.
- 5) Organización y funciones de la Asamblea General y procedimientos y formas de elección de todos los órganos sociales electivos de creación estatutaria.
- 6) Condiciones de ingreso, retiro, suspensión y exclusión de los socios, y sus derechos y obligaciones.
- 7) Forma de distribución de excedentes y asunción de pérdidas, formación de reservas y fondos permanentes.
- 8) Fecha de cierre del ejercicio económico.
- 9) Normas sobre integración y educación cooperativa.
- 10) Procedimientos de reforma del estatuto, disolución y liquidación.
- 11) Destino de los bienes para el caso de disolución.
- 12) Forma de representación de la cooperativa.

Artículo 16. (Reforma del estatuto).- Cualquier reforma del estatuto se tramitará bajo el mismo procedimiento establecido para la constitución de la cooperativa. La reforma

entrará en vigencia a partir de su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Cooperativas.

Artículo 17. (Cooperativas constituidas en el extranjero).- Para las cooperativas constituidas en el extranjero rigen las disposiciones contenidas en la Sección XVI del Capítulo I de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, con las modificaciones establecidas en la presente ley en materia de control de legalidad, registro y autorización para funcionar.

CAPÍTULO III SOCIOS

Artículo 18. (Condiciones).- Pueden ser socios las personas físicas mayores de edad, los menores de edad e incapaces por medio de sus representantes legales, los menores de edad habilitados por matrimonio y las personas jurídicas de carácter público o privado, siempre que reúnan los requisitos establecidos por el estatuto. El ingreso es libre pero podrá ser supeditado a las condiciones derivadas del objeto social.

Los menores de edad e incapaces sólo podrán ser socios de cooperativas de responsabilidad limitada.

La suscripción e integración de partes sociales por los tutores o curadores requerirán aprobación judicial del acto si la cuantía de la obligación supera las 500 UR (quinientas unidades reajustables).

Los padres y los menores habilitados por matrimonio no requieren autorización en ningún caso.

Artículo 19. (Ingreso).- La calidad de socio se adquiere mediante la adhesión en el acto constitutivo o posteriormente por decisión del Consejo Directivo, apelable ante la Asamblea General en su caso.

Artículo 20. (Responsabilidad).- Las cooperativas deberán establecer en sus estatutos la responsabilidad económica de los socios para con la cooperativa y con terceros, debiendo optar por alguna de las siguientes:

A) Responsabilidad limitada: en este caso la responsabilidad de los socios queda limitada a los aportes suscritos.

B) Responsabilidad suplementada: en este caso los socios serán responsables, además y subsidiariamente, por un monto suplementario que deberá ser siempre determinado en el estatuto y no superior a veinte veces el importe del aporte suscrito.

Por la vía de la modificación del estatuto sólo se podrá aumentar el grado de responsabilidad de los miembros, no pudiendo efectuarse la transformación inversa.

Aquellos socios que disientan con las resoluciones que impliquen aumento de su responsabilidad, cualesquiera sean las previsiones estatutarias, tendrán derecho a renunciar a la cooperativa y al reembolso de las correspondientes partes sociales de acuerdo a lo previsto en la presente ley.

En tal caso, los representantes legales de los socios menores de edad o incapaces solicitarán la rescisión parcial a su respecto, sometiendo las cuentas a la aprobación judicial.

Artículo 21. (Deberes).- Sin perjuicio de los demás que se establezcan en la presente ley y en el estatuto, los socios tendrán los siguientes deberes:

A) Cumplir con sus obligaciones sociales y económicas.

B) Desempeñar los cargos para los que fueren electos, salvo justa causa de excusa.

- C) Respetar y cumplir el estatuto, reglamentos y resoluciones de los distintos órganos de la cooperativa.
- D) Participar en las actividades que desarrolla la cooperativa para el cumplimiento de su objeto social.
- E) Ser responsable por el uso y destino de la información de la cooperativa.

Artículo 22. (Derechos).- Sin perjuicio de los demás que se establezcan en la presente ley y en el estatuto, los socios tendrán los siguientes derechos:

- A) Participar con voz y voto en las asambleas, sin perjuicio de las disposiciones específicas de los Capítulos del Título II de la presente ley o de lo que establezca el estatuto.
- B) Ser elector y elegible para desempeñar cargos en los distintos órganos de la cooperativa.
- C) Participar en todas las actividades de la cooperativa, sin discriminaciones.
- D) Utilizar los servicios sociales en las condiciones estatutarias y reglamentarias.
- E) Solicitar información sobre la marcha de la cooperativa al Consejo Directivo o a la Comisión Fiscal, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el estatuto.
- F) Formular denuncias por incumplimiento de la ley, el estatuto o los reglamentos ante la Comisión Fiscal.
- G) A renunciar voluntariamente a la cooperativa, mediante preaviso por escrito al Consejo Directivo, que deberá realizar con el plazo de antelación que fijen los estatutos, el cual no podrá ser superior a seis meses para las personas físicas y a un año para las personas jurídicas, sin perjuicio del derecho de la cooperativa a exigir el cumplimiento de las obligaciones que estime pertinentes, por los mecanismos legales previstos.

Los estatutos podrán contener la obligación de no renunciar antes de la expiración de un plazo, que no podrá exceder de cinco años contados desde el ingreso del socio a la cooperativa.

- H) Cuando la naturaleza de la cooperativa lo permita, los empleados podrán ser socios de ella pero no podrán votar cuestiones relativas a su condición en las Asambleas ni formar parte de los otros órganos sociales, sin perjuicio de otras estipulaciones que se establezcan en el estatuto. En todo caso gozarán de un tratamiento no inferior al que la legislación otorga a los trabajadores de la misma actividad.

Artículo 23. (Pérdida de la calidad de socio).- La calidad de socio se extingue por:

- A) Fin de la existencia de la persona física o jurídica, sin perjuicio de los eventuales derechos de los sucesores del socio fallecido y/o del cónyuge supérstite por su mitad de gananciales cuando corresponda.
- B) Renuncia.
- C) Pérdida de las condiciones establecidas por el estatuto para ser socio.
- D) Exclusión.

Artículo 24. (Exclusión-suspensión).- Los socios podrán ser excluidos o suspendidos en sus derechos, por las causales previstas en el estatuto.

Corresponde al Consejo Directivo adoptar la decisión, que podrá ser apelada ante la Asamblea, previa solicitud de reconsideración de la medida.

El estatuto establecerá el procedimiento para adoptar la suspensión o exclusión y los efectos con que se conceden los recursos.

Serán excluidos los socios que pierdan los requisitos exigidos para serlo, según la presente ley o el estatuto de la cooperativa, por el Consejo Directivo, de oficio o a petición de cualquier socio.

Asimismo, podrán ser excluidos aquellos que hayan incurrido en incumplimiento grave.

CAPÍTULO IV ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Artículo 25. (Órganos).- En todas las cooperativas, la dirección, administración y vigilancia estarán a cargo de la Asamblea General, el Consejo Directivo, la Comisión Fiscal y demás órganos que establezca el estatuto.

Sección I Asamblea General

Artículo 26. (Naturaleza de la asamblea y clases).- La Asamblea General es la reunión de los socios de la cooperativa a los efectos de adoptar las decisiones que le competen, de acuerdo con lo que establecen las normas legales, reglamentarias y estatutarias. La Asamblea General, que será ordinaria o extraordinaria, es la autoridad máxima de la cooperativa. Sus decisiones adoptadas conforme a la presente ley, el estatuto y el reglamento, obligan a los demás órganos y a todos los socios.

Artículo 27. (Asamblea ordinaria).- La asamblea se reunirá en sesión ordinaria dentro de los ciento ochenta días siguientes al cierre del ejercicio económico, para tratar los temas previstos en la convocatoria, dentro de los cuales deberán incluirse:

- 1)La memoria anual del Consejo Directivo.
- 2)Los estados contables.
- 3)La distribución de excedentes o financiación de pérdidas, de acuerdo con lo dispuesto por el estatuto.
- 4)El informe de la Comisión Fiscal.
- 5)La elección de los miembros del Consejo Directivo, Comisión Fiscal y Comisión Electoral y demás órganos que establezca el estatuto, cuando éste así lo disponga.

Artículo 28. (Asamblea extraordinaria).- La asamblea podrá reunirse en forma extraordinaria cuando las circunstancias lo requieran y tratar cualquier asunto de su competencia. Para tratar los temas previstos en el artículo 27 de la presente ley se requerirá que existan razones de urgencia.

Artículo 29. (Convocatoria).- La Asamblea Ordinaria será convocada por el Consejo Directivo o por la Comisión Fiscal cuando aquél omitiera hacerlo en el plazo legal.

La Asamblea Extraordinaria se reunirá toda vez que lo disponga el Consejo Directivo o lo solicite la Comisión Fiscal o un número de socios superior al 10% (diez por ciento), salvo que el estatuto exigiera un porcentaje menor.

También puede convocarla la Comisión Fiscal cuando el Consejo Directivo no respondiera o respondiera negativamente a su pedido o al de los socios.

Para el caso que la convocatoria sea solicitada por un número de socios superior al 10% (diez por ciento) y la misma no sea atendida por el Consejo Directivo o por la Comisión Fiscal, los referidos socios podrán solicitar dicha convocatoria a través de la Auditoría Interna de la Nación a la cooperativa o por vía judicial.

Artículo 30. (Forma de convocatoria).- En todos los casos la convocatoria deberá indicar fecha, hora y lugar de la Asamblea, y expresa mención de los puntos del orden del día. Deberá realizarse en la forma prevista por el estatuto, con adecuada publicidad, quedando debida constancia y con una antelación mínima de diez días y un máximo de treinta días de la fecha de la Asamblea.

La Asamblea podrá celebrarse sin publicidad de la convocatoria cuando participen en ella todos los socios.

Son nulas las resoluciones sobre temas ajenos al orden del día.

Artículo 31. (Asamblea de Delegados).- En sustitución de las Asambleas Generales el estatuto podrá prever, por causas objetivas y expresas, Asambleas de Delegados.

Los delegados deberán ser elegidos conforme con el procedimiento previsto en el estatuto y los reglamentos, debiendo respetarse el principio de control y gestión democrática por los socios.

Asimismo, para la elección de dichos delegados, se deberá aplicar un criterio de proporcionalidad de acuerdo a la cantidad de socios que representen.

Artículo 32. (Quórum).- La Asamblea se constituirá en primera convocatoria con la mitad más uno de los socios o delegados convocados al efecto.

La Asamblea en segunda convocatoria tendrá los mismos requisitos formales y se celebrará dentro de los treinta días siguientes a la primera convocatoria. No obstante el estatuto podrá autorizar la segunda convocatoria a realizarse una hora más tarde que la primera, sesionando la Asamblea con el número de presentes en la misma.

La Asamblea podrá pasar a cuarto intermedio, a fin de continuar dentro de los treinta días corridos siguientes. Sólo podrán participar en la segunda reunión los socios que se hayan registrado en la primera convocatoria.

Artículo 33. (Mayoría y voto por poder).- Las resoluciones se adoptarán por mayoría simple de votos presentes, salvo los asuntos para los cuales la ley o el estatuto exigieran mayorías especiales.

Se requerirá mayoría especial de dos tercios de votos del total de los socios, para decidir la fusión o incorporación, la disolución, el cambio sustancial del objeto social, el cambio de responsabilidad limitada a suplementada o la reforma del estatuto.

En la Asamblea General, el socio podrá hacerse representar por otro socio mediante poder escrito.

Ningún apoderado podrá representar a más de un socio.

No se admite el voto por poder en las Asambleas de Delegados.

Artículo 34. (Competencia).- Es de competencia exclusiva de la Asamblea General, sin perjuicio de otros asuntos que la presente ley o el estatuto le reserven:

- 1) Aprobar, modificar e interpretar el estatuto y los reglamentos de la cooperativa.
- 2) Fijar las políticas generales de la cooperativa y autorizar el presupuesto general, cuando lo determine el estatuto.
- 3) Elegir, en su caso, y remover a los miembros del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscal y demás órganos sociales, si hubieren sido electos por la Asamblea.
- 4) Fijar las compensaciones de los miembros del Consejo Directivo, de la Comisión Fiscal y de las Comisiones que se determinen cuando haya lugar.
- 5) Resolver sobre la memoria y los estados contables, previo conocimiento de los informes de la Comisión Fiscal y del auditor si correspondiere.
- 6) Decidir sobre la distribución de excedentes y financiación de pérdidas, de acuerdo con las disposiciones del estatuto.
- 7) Aprobar la emisión de obligaciones, de participaciones subordinadas o con interés, de participaciones especiales u otras formas de financiación mediante valores negociables, previstas en el estatuto.
- 8) Decidir la iniciación de acción de responsabilidad contra los miembros del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscal.

9)Decidir sobre la asociación con las personas referidas en el artículo 81 de la presente ley.

10)Resolver sobre fusión, incorporación, disolución, cambio sustancial del objeto social, cambio de responsabilidad limitada a suplementada o reforma del estatuto de la cooperativa.

11)Resolver sobre las apelaciones de los socios que fueren excluidos en virtud de resoluciones del Consejo Directivo, salvo que el estatuto prevea la existencia del Comité de Recursos.

12)Resolver sobre las reclamaciones de los socios contra los actos del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscal.

13)Aprobar nuevos aportes obligatorios, admitir aportes voluntarios, actualizar el valor de los aportes al capital social, fijar los aportes de los nuevos socios y establecer cuotas de ingreso o periódicas.

Sección II

Consejo Directivo

Artículo 35. (Concepto y naturaleza).- El Consejo Directivo es el órgano encargado de la administración permanente de la cooperativa.

Sus atribuciones serán determinadas en el estatuto, sin perjuicio de las establecidas por la ley.

Se consideran facultades implícitas de este órgano las que la ley o el estatuto no reserven expresamente a la Asamblea y las que resultan necesarias para la realización de las actividades en cumplimiento del objeto social.

Artículo 36. (Composición y elección).- El Consejo Directivo se compondrá de un número impar de miembros no inferior a tres, determinado por el estatuto, debiendo existir, en todo caso, un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.

Los miembros titulares y suplentes serán socios electos por el procedimiento y período que establezca el estatuto, el que deberá establecer también si son o no reelegibles.

Los suplentes reemplazarán a los titulares en caso de renuncia, remoción, ausencia o fallecimiento o cualquier tipo de vacancia y serán llamados a ocupar el cargo por el Consejo Directivo. Agotada la lista de suplentes proclamados, el Consejo Directivo designará a los reemplazantes de la misma lista si la hubiere, o según la votación decreciente en la elección nominal y dará cuenta a la Asamblea General más inmediata.

En aquellas cooperativas cuyo número de socios sea inferior a diez, el estatuto podrá establecer la existencia de un Administrador único, persona física que ostente la condición de socio, que asumirá las competencias y funciones previstas en la presente ley para el Consejo Directivo, su Presidente y Secretario.

Los miembros del Consejo Directivo deberán declarar al inicio de su mandato, o durante su ejercicio y según lo que establezca el estatuto, las actividades personales o comerciales que desarrollan y que puedan ser competencia de las actividades de la cooperativa.

Artículo 37. (Remoción).- La Asamblea General puede remover en cualquier tiempo a los miembros del Consejo Directivo, siempre que éstos hayan sido electos por la Asamblea y que el asunto figure en el orden del día. Consumada la remoción, asumirán los cargos los suplentes respectivos. En caso de remoción de éstos, también la Asamblea, en el mismo acto, mediante voto secreto y por un plazo que fijará la misma, elegirá a los reemplazantes, salvo que el estatuto establezca un procedimiento especial al efecto.

El estatuto deberá prever la forma y el procedimiento de remoción, en aquellos casos en que el propio estatuto haya previsto el procedimiento eleccionario por forma diferente a la elección directa por la Asamblea General.

Artículo 38. (Reglas de funcionamiento).- El estatuto debe establecer las reglas de funcionamiento del Consejo Directivo.

Las actas de las sesiones deben ser firmadas por el Presidente y por el Secretario, salvo que el estatuto requiera también la firma de otros asistentes.

El quórum será de más de la mitad de sus miembros.

Artículo 39. (Representación).- La representación de la cooperativa le corresponde al Consejo Directivo, debiendo actuar conjuntamente el Presidente y el Secretario del mismo, salvo que el estatuto disponga otra cosa al respecto.

Artículo 40. (Responsabilidad de los miembros del Consejo Directivo).- Los miembros del Consejo Directivo responden solidariamente frente a la cooperativa y los socios por violación de la ley, el estatuto y los reglamentos.

Sólo puede eximirse el miembro que no haya participado en la sesión que adoptó la resolución, o haya dejado constancia en acta de su voto en contra.

Sección III

Comité Ejecutivo

Artículo 41. (Comité Ejecutivo).- El estatuto podrá prever un Comité Ejecutivo, integrado por miembros provenientes del Consejo Directivo, para atender la gestión ordinaria de la cooperativa. La existencia de este Comité no modifica los deberes y las responsabilidades de los miembros del Consejo Directivo.

Sección IV

Comité de Recursos

Artículo 42. (Comité de Recursos).- El estatuto podrá prever la existencia de un Comité de Recursos, delegado de la Asamblea General, que tramitará y resolverá cuantos recursos vengan atribuidos a su conocimiento o al de la Asamblea, por vía legal o estatutaria.

La composición y el régimen de funcionamiento del Comité de Recursos se fijará por el estatuto. Estará integrado, al menos, por tres miembros de entre los socios con plenitud de derechos elegidos en votación secreta, de acuerdo al procedimiento que establezca el estatuto.

Las resoluciones del Comité de Recursos podrán recurrirse, sin efecto suspensivo, por el procedimiento previsto en el artículo 44 de la presente ley.

Deberán abstenerse de intervenir, en la tramitación y resolución de los correspondientes recursos, los miembros del Comité que tengan, respecto al socio o aspirante a socio afectado, parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, de afinidad dentro del segundo, o relación de dependencia. Asimismo, deberán abstenerse aquellos miembros que tengan relación directa con el objeto del recurso.

No podrán formar parte del Comité de Recursos los miembros del Consejo Directivo, ni de la Comisión Fiscal, ni las personas que tengan relación de dependencia con la cooperativa.

Sección V

Comisiones Auxiliares

Artículo 43. (Comisiones Auxiliares).- El Consejo Directivo podrá designar de su seno o de entre los socios, Comisiones Auxiliares de carácter permanente o temporal y les determinará sus funciones.

En las cooperativas de primer grado deberá integrarse, en forma permanente, una Comisión de Educación, Fomento e Integración Cooperativa.

Sección VI Recursos

Artículo 44. (Recursos).- Las resoluciones del Consejo Directivo podrán ser recurridas por los socios ante la Asamblea General o, en su caso, ante el Comité de Recursos, según el procedimiento establecido en el estatuto.

Sección VII Comisión Fiscal

Artículo 45. (Naturaleza y atribuciones).- La Comisión Fiscal es el órgano encargado de controlar y fiscalizar las actividades económicas y sociales de la cooperativa. Debe velar para que el Consejo Directivo cumpla la ley, el estatuto, los reglamentos y las resoluciones de la Asamblea General.

Artículo 46. (Alcance de sus funciones).- Su función se limita al derecho de observación precisando en cada caso las disposiciones que considere transgredidas. Debe dejar constancia de sus observaciones o requerimientos y, previa solicitud al Consejo Directivo, puede convocar a Asamblea General cuando lo juzgue necesario e informar a la Auditoría Interna de la Nación.

Artículo 47. (Funciones específicas).- Sin perjuicio de las demás funciones señaladas en la presente ley y en el estatuto, la Comisión Fiscal debe:

A)Fiscalizar la dirección y administración de la cooperativa, a cuyo efecto sus miembros pueden asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones del Consejo Directivo. Esta fiscalización se cumplirá en forma ilimitada y permanente sobre las operaciones sociales, pero sin intervenir en la gestión administrativa.

B)Examinar los libros, títulos y cualquier otro documento cuando juzgue conveniente y, por lo menos, una vez cada tres meses.

C)Presentar a la Asamblea General Ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la cooperativa, dictaminando sobre la memoria y los estados contables.

D)Suministrar a la Asamblea General toda información que ésta le requiera sobre las materias que son de su competencia.

E)Hacer incluir en el orden del día de la Asamblea General los puntos que considere procedentes dentro del plazo previsto en el estatuto social.

F)Vigilar que los órganos sociales acaten debidamente las leyes, el estatuto, los reglamentos y las resoluciones de la Asamblea General.

G)Investigar las denuncias que los socios le formulen por escrito, mencionarlas en sus informes a la Asamblea General y expresar acerca de ellas las consideraciones y propuestas que correspondan.

H)Si el estatuto lo prevé, asumir transitoriamente el gobierno de la cooperativa, cuando por desintegración parcial o total del Consejo Directivo, éste no esté en condiciones de

funcionar, convocando a la Asamblea General Extraordinaria dentro del plazo de treinta días a fin de considerar la situación.

Artículo 48. (Composición y elección).- La Comisión Fiscal se compondrá de un número impar de miembros, será elegida en la forma y por el período que establezca el estatuto.

En las cooperativas con menos de quince socios podrá integrarse por un solo miembro. Será incompatible la calidad de miembro de la Comisión Fiscal con la de miembro de cualquier otro órgano social.

Artículo 49. (Aplicación de otras normas).- Rigen para la Comisión Fiscal las disposiciones sobre remoción, reglas de funcionamiento, suplencia, incompatibilidad y responsabilidad establecidas para el Consejo Directivo.

Sección VIII

Comisión Electoral

Artículo 50. (Comisión Electoral).- La Comisión Electoral tendrá a su cargo la organización, la fiscalización y el contralor de los actos eleccionarios de la cooperativa y la proclamación de las autoridades electas. Se compondrá por un número impar de miembros electos por la Asamblea General, de acuerdo al procedimiento que establezca el estatuto, y será obligatoria en el caso de las cooperativas de primer grado.

En las cooperativas con menos de quince socios podrá componerse por un solo miembro. Le compete a la misma resolver los recursos que pudieran presentarse durante todo el proceso electoral, de los que entenderá subsidiariamente la Asamblea General. Será incompatible la calidad de miembro de la Comisión Electoral con la de miembro de cualquier otro órgano de dirección.

Sección IX

Compensaciones

Artículo 51. (Compensaciones).- Si el estatuto lo prevé, la Asamblea General podrá resolver compensar el trabajo personal realizado por los miembros del Consejo Directivo, del Comité Ejecutivo, de la Comisión Fiscal u otras Comisiones en el desempeño de sus cargos. Dicha compensación podrá realizarse además del pago de los gastos, con rendición de cuentas, en que se incurra por el mismo motivo.

CAPÍTULO V

RÉGIMEN ECONÓMICO

Sección I

Patrimonio social

Artículo 52. (Recursos patrimoniales).- Son recursos de naturaleza patrimonial de las cooperativas para el cumplimiento de su objeto social, los siguientes:

- 1)El capital social.
- 2)Los fondos patrimoniales especiales.
- 3)Las reservas legales, estatutarias y voluntarias.
- 4)Las donaciones, legados y recursos análogos que reciban destinados a incrementar el patrimonio.
- 5)Los recursos que se deriven de los otros instrumentos de capitalización.

6) Los ajustes provenientes de las reexpresiones monetarias o de valuación.

7) Los resultados acumulados.

Sección II

Capital social

Artículo 53. (Capital social).- El capital social está compuesto por las partes sociales, provenientes de los aportes obligatorios y voluntarios realizados por los socios y, cuando correspondiere, de sus reexpresiones contables.

Artículo 54. (Partes sociales).- Las partes sociales son nominativas, indivisibles, de igual valor y transferibles solamente a personas que reúnan las condiciones requeridas por el estatuto para ser socio, previa aprobación del Consejo Directivo.

Serán integradas en dinero, en especie o en trabajo convencionalmente valuados, en la forma y en el plazo que establezca el estatuto.

Artículo 55. (Aportes obligatorios).- El estatuto fijará el aporte obligatorio mínimo de capital social para ser socio, el que podrá variar en proporción al compromiso y/o uso potencial que cada socio asuma de la actividad cooperativa.

La Asamblea General podrá acordar la exigencia de nuevos aportes obligatorios. El socio que tuviera desembolsados aportes voluntarios podrá aplicarlos, en todo o en parte, a cubrir los nuevos aportes obligatorios acordados por la Asamblea General.

Artículo 56. (Aportes voluntarios).- La Asamblea General y, si el estatuto lo prevé, el Consejo Directivo, podrán acordar la admisión de aportes voluntarios al capital social por parte de los socios.

Artículo 57. (Adquisición de aportes).- Cuando el estatuto lo prevea y según la forma que él determine, los aportes integrados por los socios pueden ser adquiridos por la cooperativa con cargo a una reserva especial creada al efecto, siempre que no se afecte el patrimonio social y la liquidez de la cooperativa.

Artículo 58. (Capital variable e ilimitado).- El monto total del capital social será variable e ilimitado, sin perjuicio de que en el estatuto se deberá establecer una cantidad mínima.

Artículo 59. (Capital proporcional).- El estatuto puede establecer un procedimiento para la formación e incremento del capital en proporción con el uso real o potencial de los servicios sociales, el trabajo u otra condición que presenten los socios en relación a la cooperativa.

Artículo 60. (Documentación de partes sociales).- El estatuto deberá establecer que las partes sociales sean representadas por certificados, constancias de aportes u otro documento nominativo.

Sección III

Fondos patrimoniales especiales

Artículo 61. (Definición).- Son fondos patrimoniales especiales aquellos recursos que se integran a través de aportes específicos de los socios, dispuestos por la Asamblea General y que tienen como finalidad el fortalecimiento del patrimonio.

Sección IV

Reservas legales, estatutarias y voluntarias

Artículo 62. (Definición).- Las reservas son recursos provenientes de los excedentes netos de gestión aprobados por la Asamblea General, que tienen como finalidad el acrecentamiento del patrimonio social y podrán ser constituidas por disposiciones legales, estatutarias o por voluntad de la Asamblea General.

Las reservas son irrepartibles, pudiendo solamente afectarse para absorber pérdidas, y cuando se disminuyan por esta causa no se podrán aprobar distribuciones de excedentes hasta su recomposición.

Sección V

Legados y donaciones

Artículo 63. (Legados y donaciones).- Las cooperativas podrán recibir de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todo tipo de legados o donaciones, compatibles con el objeto social, destinados a incrementar su patrimonio a ser consumidos de conformidad con la voluntad del donante o del causante.

Sección VI

Otros instrumentos de capitalización

Artículo 64. (Instrumentos de capitalización).- El estatuto podrá prever la emisión de participaciones subordinadas, participaciones con interés y otros instrumentos de capitalización que puedan crearse.

Artículo 65. (Participaciones subordinadas).- Son aquellos recursos financieros aportados por socios o no socios que se incorporan al patrimonio de la cooperativa, sujetos al riesgo de la gestión y cuya remuneración queda subordinada a la existencia de excedentes netos de gestión de la cooperativa, con arreglo a lo previsto por el artículo 70 de la presente ley.

Artículo 66. (Participaciones con interés).- Son recursos financieros aportados por socios o no socios que se incorporan al patrimonio de la cooperativa, sujetos al riesgo de la gestión, y reciben una remuneración con independencia de la existencia o no de excedentes netos de gestión.

Artículo 67. (Características comunes a los instrumentos de capitalización).- Tanto las participaciones subordinadas como las participaciones con interés se representarán en títulos que deberán contener, por lo menos, los siguientes datos:

- 1) Denominación del instrumento.
- 2) Datos identificatorios y registrales de la cooperativa emisora.
- 3) Valor nominal del título con descripción de moneda, monto y condiciones de actualización, si correspondiere.
- 4) Fecha de emisión.
- 5) Nombre del adquirente del título.
- 6) Las fechas y los porcentajes estipulados para los rescates, si correspondiere.
- 7) Modalidad del tipo de interés, el que podrá ser fijo, variable o mixto.
- 8) La tasa de interés.
- 9) Fecha, lugar y forma de pago de los intereses.

10) Firma del representante legal de la cooperativa.

11) Derecho de la cooperativa emisora al rescate anticipado a su vencimiento.

Los tenedores de los instrumentos de capitalización no adquieren, en razón de su tenencia, los derechos de los socios de la cooperativa ni podrán participar en las Asambleas ni integrar ningún órgano social a excepción de la Comisión Fiscal, siempre que el estatuto lo prevea.

Las participaciones subordinadas, las participaciones con interés u otros instrumentos de capitalización, serán nominativos y transferibles, con previa aprobación del Consejo Directivo si el estatuto así lo dispusiere.

En las transferencias de cada título se deberán anotar la fecha y la identificación del nuevo adquirente y tenedor y deberá inscribirse en el Libro correspondiente.

El saldo nominal vigente de estos instrumentos no podrá superar, en conjunto, el 50% (cincuenta por ciento) del patrimonio de la cooperativa emisora.

Los instrumentos de capitalización, además de ajustarse a las formalidades indicadas en este artículo, podrán establecer en sus títulos representativos otras condiciones que a juicio de la cooperativa se entiendan necesarias, con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a este tipo de valores.

En caso de liquidación de la cooperativa emisora, estos instrumentos concurrirán a la misma en pie de igualdad con los socios comunes.

Sección VII

Reexpresiones contables

Artículo 68. (Reexpresiones contables).- Sin perjuicio de las normas legales en la materia, los estatutos podrán establecer que los ajustes a los que se refiere el numeral 6) del artículo 52 de la presente ley, se reconozcan con el rubro de ajustes al patrimonio o, de corresponder, en los otros rubros patrimoniales.

Sección VIII

Resultados acumulados

Artículo 69. (Resultados acumulados).- Son los acrecentamientos o disminuciones patrimoniales generados por el resultado neto de la gestión de la cooperativa, que están pendientes de distribución o de absorción, respectivamente.

La distribución de los excedentes como la absorción de las pérdidas generadas en cada ejercicio económico, deberán ser sometidas a consideración de la Asamblea General Ordinaria, conjuntamente con los estados contables respectivos, a través del proyecto de distribución de los excedentes netos del ejercicio.

Artículo 70. (Destino de los excedentes netos del ejercicio).- La Asamblea General Ordinaria determinará el destino de los excedentes netos del ejercicio, de acuerdo al siguiente orden:

En primer lugar, se deducirán los importes necesarios para:

1) Abonar los intereses a pagar a los instrumentos de capitalización que correspondan.

2) Recomponer los rubros patrimoniales cuando hayan sido disminuidos por la absorción de pérdidas de ejercicios anteriores y compensar pérdidas aún pendientes de absorción.

El remanente se destinará de acuerdo al siguiente orden:

1) El 15% (quince por ciento) como mínimo, para la constitución de un Fondo de Reserva Legal, hasta que éste iguale al capital reduciéndose al 10% (diez por ciento) a partir de ese momento y cesando al ser triplicado el capital.

2)El 5% (cinco por ciento) como mínimo, para el Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa.

3)El 10% (diez por ciento) para la constitución de una Reserva por concepto de operaciones con no socios.

Y el saldo será destinado al reparto entre los socios en concepto de retorno o a pagar intereses a las partes sociales integradas hasta el máximo de interés corriente en plaza, según determine la Asamblea.

El monto a ser repartido entre los socios en concepto de retorno no podrá ser inferior al 50% (cincuenta por ciento) del remanente y se distribuirá de acuerdo a los siguientes criterios:

A)En las cooperativas de primer grado, en proporción a las operaciones efectuadas con la cooperativa o al trabajo realizado en ella.

B)En las cooperativas de segundo o ulterior grado, en proporción al capital social aportado o a los servicios utilizados, según establezca el estatuto.

Artículo 71. (Capitalización de retornos e intereses sobre partes sociales).- La Asamblea General podrá resolver por mayoría absoluta de presentes, la capitalización de los importes destinados a retornos e intereses sobre las partes sociales.

Artículo 72. (Reembolso de las partes sociales).- Los socios o sus sucesores sólo tendrán derecho al reintegro de su capital integrado por su valor nominal o, si el estatuto o la ley lo prevé, en valores ajustados. El reintegro procederá siempre que el socio haya perdido su condición de tal en la cooperativa y haya saldado todas sus obligaciones con la misma. Asimismo, se deberán adicionar o disminuir, según corresponda, los resultados acumulados no distribuidos y los del ejercicio en curso al momento de la pérdida de la calidad de socio.

Los estatutos establecerán los criterios relativos a la forma del reintegro.

Los titulares de los aportes integrados en otros instrumentos de capitalización, tendrán derecho al reintegro de los mismos en las condiciones establecidas en los contratos de emisión respectivos.

Artículo 73. (Límites al reembolso de las partes sociales y de las participaciones con interés).- El estatuto puede limitar el reembolso anual de las partes sociales y las participaciones con interés previstas en el artículo 66 de la presente ley, de las personas que egresen en el mismo ejercicio económico, hasta un monto que no sea superior al 5% (cinco por ciento) de las partes sociales integradas y participaciones con interés, conforme con el último balance aprobado. Los casos que no puedan ser atendidos con el porcentaje establecido, lo serán en los ejercicios siguientes por orden de antigüedad de su egreso.

En el caso en que el estatuto de la cooperativa haya previsto la posibilidad del límite, en los títulos de las participaciones con interés deberá aparecer así anunciado.

Los reembolsos de partes sociales podrán suspenderse por un período de hasta dos años en caso de pérdidas ocurridas en el ejercicio económico, según resolución fundada de la Asamblea General.

El estatuto también podrá establecer un límite a los reembolsos a las partes sociales, asociado a los requerimientos mínimos de capital en función de la actividad económica que desarrolle la cooperativa.

Artículo 74. (Irrepartibilidad de otros recursos patrimoniales).- Los recursos patrimoniales de la cooperativa, a excepción de las partes sociales, de las reexpresiones contables, de los instrumentos de capitalización y de los resultados acumulados,

constituyen patrimonio propio e irrepartible de la cooperativa. No podrán distribuirse entre los socios a ningún título ni acrecentarán sus aportes individuales.

Sección IX

Recursos no patrimoniales

Artículo 75. (Fuentes de financiamiento y fondos especiales).- Las cooperativas podrán asumir todas las formas de pasivo y emitir obligaciones a suscribir por socios o terceros conforme con las condiciones que establezca la reglamentación.

Asimismo, con el objeto de proveer recursos con destino específico para la prestación de servicios y beneficios a los socios o para gastos de gestión, las cooperativas podrán crear e incrementar cuotas sociales o fondos especiales con aportes voluntarios u obligatorios de los socios o parte de los excedentes netos anuales, conforme lo establezca el estatuto.

Artículo 76. (Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa).- El Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa tendrá por objeto la difusión y promoción del cooperativismo, la formación de los socios y trabajadores en técnicas cooperativas, económicas y profesionales, el sostenimiento de los organismos de integración de segundo y tercer grado que cumplan funciones educativas, de asistencia técnica e investigación y, complementariamente, la atención de objetivos de incidencia social, cultural o medioambiental.

Dichas actividades podrán ser desarrolladas directamente por la cooperativa o a través de federaciones, confederaciones o entidades auxiliares especializadas o conjuntamente con ellas.

Integrarán el Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa los excedentes netos del ejercicio que se asigne al mismo con un porcentaje mínimo establecido en el artículo 70 de la presente ley y las donaciones y ayudas recibidas de terceros con ese destino específico.

El informe anual de la gestión que se presente a la Asamblea incluirá un detalle del uso de dicho Fondo, con expresión de cantidades, conceptos y actividades.

Sección X

Régimen documental y contable

Artículo 77. (Libros sociales).- Deberán llevar en orden y al día, los siguientes libros:

- 1) Libro de registro de socios.
- 2) Libros de actas de la Asamblea General, del Consejo Directivo, de la Comisión Fiscal y del Comité de Recursos, en su caso.

Los referidos libros podrán ser presentados en soportes informáticos u otros medios admitidos por la reglamentación.

Los libros y demás documentos de la cooperativa estarán bajo la custodia, vigilancia y responsabilidad del Consejo Directivo.

Artículo 78. (Ejercicio económico, contabilidad, memoria y estados contables).- El ejercicio económico será anual, salvo en los casos de constitución, extinción o fusión de la cooperativa, o en otros casos extraordinarios, debidamente autorizados por la Auditoría Interna de la Nación.

La contabilidad será llevada con arreglo a las disposiciones legales vigentes y a las disposiciones y criterios impartidos por la Auditoría Interna de la Nación u otros organismos competentes.

A la fecha de cierre del ejercicio, en un plazo máximo de ciento ochenta días, el Consejo Directivo presentará los estados contables, la memoria sobre la gestión realizada y la evolución del número de socios en el período y el proyecto de distribución de los excedentes de gestión o de absorción de pérdidas, a la Asamblea General con informe de la Comisión Fiscal y del auditor si correspondiere.

Artículo 79. (Auditoría).- Las cooperativas podrán contar con un servicio permanente de auditoría externa con intervención de profesional habilitado. Y, en su caso, de conformidad con lo establecido en la presente ley, su reglamentación o las normas jurídicas que regulan el sistema de auditorías obligatorias prescriptas para la rama de actividad que desarrollen las cooperativas.

El servicio de auditoría podrá ser prestado por otra cooperativa o entidad con intervención de profesional habilitado.

Sección XI

Operaciones con no socios

Artículo 80. (Operaciones con no socios).- Por razones de interés social o cuando fuera necesario para el mejor desarrollo de su actividad económica, siempre que no comprometa su autonomía, las cooperativas podrán prestar servicios propios de su objeto social a no socios, los que no podrán otorgarse en condiciones más favorables que a los socios. Los excedentes netos que deriven de estas operaciones serán destinados según lo previsto por el artículo 70 de la presente ley.

No se considerarán operaciones realizadas con no socios, las que se efectúen con los siguientes fines:

A) Para servir a socios de otra cooperativa.

B) Para liquidar artículos sobre los que se deje de operar o que podrían desmerecerse con una conservación prolongada.

C) Para servir al público, por motivo de general utilidad, a requerimiento de organismos del Estado.

D) En el caso de las cooperativas de segundo o ulterior grado, también aquellas operaciones que se realicen con los socios de sus entidades socias.

E) Las operaciones que se realicen entre cooperativas.

CAPÍTULO VI

ASOCIACIÓN, FUSIÓN, INCORPORACIÓN

Artículo 81. (Asociación entre cooperativas o con otras personas jurídicas).- Las cooperativas podrán asociarse entre sí o con personas de otra naturaleza jurídica, sean públicas o privadas, así como tener en ellas participación, si así lo prevé el estatuto, a condición de que sea conveniente para su objeto social y que no transfieran beneficios fiscales ni legales que les sean propios.

Artículo 82. (Federaciones y confederaciones).- Para la defensa y la promoción de sus intereses en cuanto cooperativas, éstas podrán asociarse libre y voluntariamente en federaciones y confederaciones de cooperativas, sin perjuicio de poder promover cualquier otra fórmula asociativa, de acuerdo con la legislación general reguladora del derecho de asociación.

Corresponde a las federaciones y confederaciones de cooperativas:

A) Representar a los miembros que se asocien de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos.

B) Procurar la conciliación de los conflictos surgidos entre sus entidades asociadas, cuando éstas lo soliciten.

C) Organizar servicios de asesoramiento, asistencia jurídica, contable y técnica y cuantos sean convenientes a los intereses de sus socios.

D) Fomentar la promoción, formación y educación cooperativa.

E) Colaborar con los organismos competentes en la materia cooperativa.

F) Ejercer cualquier otra actividad de naturaleza análoga.

Artículo 83. (Fusión).- Dos o más cooperativas podrán fusionarse a los efectos de alcanzar con mayor eficacia sus objetivos sociales. Las cooperativas fusionadas se disuelven sin liquidar su patrimonio pero se extingue la personería jurídica. La cooperativa emergente de la fusión, subroga de pleno derecho a las que le dieron origen en todos sus derechos, acciones y obligaciones.

Artículo 84. (Incorporación).- Habrá incorporación cuando una cooperativa absorbe a otra o a otras cooperativas o entidades jurídicas, conservando la incorporante su personería jurídica y extinguiéndose la de las incorporadas. La incorporante subroga en los derechos, acciones y obligaciones a las incorporadas.

Artículo 85. (Trámites).- Para la fusión o incorporación, las entidades interesadas elaborarán un plan de operaciones que una vez aprobado por el órgano estatal de control y por el organismo público competente por la naturaleza de la actividad que realice la cooperativa, será sometido a las Asambleas Extraordinarias de las afectadas. Aprobada la fusión o la incorporación, se solicitará la inscripción respectiva en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Cooperativas.

Artículo 86. (Cooperativas de grado superior).- Por resolución de sus respectivas asambleas las cooperativas podrán constituir cooperativas de segundo o ulterior grado o asociarse a ellas. Éstas se regirán por las disposiciones de la presente ley con las adecuaciones que resulten de su naturaleza. Deben contar con un mínimo de dos socios. En las cooperativas de segundo o ulterior grado también podrán integrarse en calidad de socios personas jurídicas de otra naturaleza, públicas o privadas, y personas físicas, hasta un máximo del 20% (veinte por ciento) del total del capital social de la cooperativa.

Artículo 87. (Actividad).- Las cooperativas de segundo o ulterior grado podrán realizar, conforme con las disposiciones de la presente ley y de sus respectivos estatutos, actividades de carácter técnico, económico, social, cultural y asumir la representación de sus miembros.

Artículo 88. (Representación y voto).- Las cooperativas de segundo o ulterior grado podrán establecer un régimen de representación y voto proporcional al número de socios, al capital aportado, uso de los servicios u otros criterios que establezca el estatuto.

CAPÍTULO VII

OTRAS MODALIDADES DE COLABORACIÓN ECONÓMICA, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 89. (Corporaciones cooperativas).- Son corporaciones cooperativas aquellas asociaciones empresariales que, constituidas mayoritariamente por cooperativas de primer y segundo o ulterior grado, tengan por objeto la definición de políticas

empresariales, su control y, en su caso, la planificación estratégica de la actividad de sus socios, así como la gestión de los recursos y actividades comunes.

El estatuto de la corporación cooperativa distribuirá las facultades de administración y fiscalización de la misma entre un órgano de fiscalización y un órgano de dirección, unipersonal o colegiado.

El órgano de dirección tendrá a cargo la gestión y la administración, incluyendo las facultades referidas a la admisión y renuncia o exclusión de socios y a la aplicación del régimen disciplinario, así como la representación de la entidad. Sus miembros serán designados y revocados por el órgano de fiscalización.

El órgano de fiscalización controlará la gestión y la actividad del órgano de dirección. Asimismo, corresponde a dicho órgano de fiscalización autorizar los actos de administración extraordinaria que determine el estatuto. Los miembros del órgano de fiscalización serán elegidos de acuerdo a lo que determine el estatuto.

Las corporaciones cooperativas son personas jurídicas y en todo lo no regulado expresamente por este artículo se aplicará lo dispuesto para las cooperativas de segundo o ulterior grado.

Artículo 90. (Cooperativas mixtas).- Son cooperativas mixtas aquellas en las que existen socios minoritarios cuyo derecho de voto en la Asamblea General se podrá determinar, de modo exclusivo o preferente, en función del capital aportado, que estará representado por medio de certificados, constancia de aportes u otros documentos o títulos.

En estas cooperativas el derecho de voto en la Asamblea General respetará la siguiente distribución:

A) Al menos el 51% (cincuenta y uno por ciento) de los votos se atribuirá, en la proporción que defina el estatuto, a socios cooperativistas.

B) Una cuota máxima, a determinar estatutariamente, del 49% (cuarenta y nueve por ciento) de los votos se distribuirá en acciones con voto que, si el estatuto lo prevé, podrán ser libremente negociables en el mercado.

En el caso de las acciones con voto, tanto los derechos y obligaciones de sus titulares como el régimen de los aportes se regularán por el estatuto y por lo dispuesto en la legislación de sociedades anónimas y tributarias para las acciones.

La participación de cada uno de los dos grupos de socios en los resultados anuales a distribuir, sean positivos o negativos, se determinará en proporción al porcentaje de votos que cada uno de los dos colectivos tenga según lo previsto en el inciso segundo de este artículo.

Los resultados imputables a los poseedores de acciones con voto se distribuirán entre ellos en proporción al capital desembolsado. Los resultados imputables a los restantes socios se distribuirán entre éstos según los criterios generales definidos en la presente ley para las cooperativas de primer grado.

La validez de cualquier modificación autorreguladora que afecte a los derechos y obligaciones de alguno de los dos colectivos de socios requerirá el consentimiento mayoritario del grupo correspondiente, que podrá obtenerse mediante votación separada en la Asamblea General o en Junta especial y parcial.

En el momento de la constitución de estas cooperativas, previo a su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Cooperativas, la Auditoría Interna de la Nación podrá autorizar la previsión estatutaria de repartibilidad en caso de liquidación, de la cuota parte del Fondo de Reserva Obligatorio correspondiente a los titulares de las acciones con votos, con arreglo a los criterios señalados en el inciso cuarto y respetando las demás normas de adjudicación del haber social establecidas en el artículo 97 de la presente ley.

No podrán adoptar la forma de cooperativa mixta regulada en este artículo las cooperativas de vivienda ni las de ahorro y crédito, ni las cooperativas que posean secciones de ahorro y crédito.

Artículo 91. (Secciones).- El estatuto de la cooperativa podrá prever y regular la existencia y el funcionamiento de secciones que desarrollen actividades económico-sociales específicas, complementarias del objeto social principal. En todo caso será necesario que lleven contabilidad independiente, sin perjuicio de la general que corresponde a la cooperativa. La representación y gestión de la sección corresponderá, en todo caso, al Consejo Directivo de la Cooperativa.

La distribución de excedentes será diferenciada, teniendo en cuenta el tipo de actividad practicada por el socio, según lo dispone el artículo 70 de la presente ley.

El volumen de operaciones de una sección, en ningún caso, podrá superar el 20% (veinte por ciento) del volumen total de operaciones de la cooperativa. Y en forma conjunta las secciones no podrán superar el 50% (cincuenta por ciento) del volumen total de operaciones de la cooperativa.

Las cooperativas que dispongan de alguna sección estarán obligadas a contar con un servicio de auditoría externa en la forma que lo prevé el artículo 79 de la presente ley, la que estará obligada a expedirse expresamente en cada año en cuanto a si se cumplen o no las prescripciones del presente artículo.

Para el caso en que se superasen los porcentajes precedentemente establecidos, la cooperativa dentro del año siguiente a la fecha de aprobación del balance general del que resulte que el límite ha sido superado, deberá adecuarse a las disposiciones del presente artículo. Si vencido el plazo de un año antes referido se comprobare que no se ha subsanado el desvío, la cooperativa deberá proponer a la Auditoría Interna de la Nación un plan de adecuación, el cual deberá ser aprobado por la autoridad de control. De ser rechazado o aceptado y no cumplido el plan de adecuación, entonces, constituirá de pleno derecho y automáticamente causal de disolución de la cooperativa, pudiendo dicha circunstancia ser judicialmente declarada a solicitud de cualquier persona titular de un interés legítimo, o de oficio por la autoridad de control.

Artículo 92. (Normas aplicables a las secciones).- A las secciones relacionadas en el artículo anterior le serán aplicables todas las normas legales y reglamentarias correspondientes al tipo de cooperativa o actividad que desarrolle cada sección, excepto los beneficios legales tales como descuentos de sueldos o de pasividades por retenciones ordenadas por cooperativas de conformidad con la Ley N° 17.691, de 23 de setiembre de 2003. Asimismo, no se podrán transferir a las secciones beneficios fiscales ni legales que provengan del tipo de actividad u objeto principal de la cooperativa.

Artículo 93. (Causas de disolución).- Las cooperativas se disolverán por:

- 1) Decisión de la Asamblea General por la mayoría de 2/3 (dos tercios) de votos presentes.
- 2) Reducción del número de socios por debajo del mínimo legal durante un período superior a un año.
- 3) Fusión o incorporación.
- 4) Reducción del capital por debajo del mínimo establecido por el estatuto.
- 5) Declaración de liquidación en un proceso de liquidación concursal.
- 6) Sentencia judicial firme.
- 7) Finalización o imposibilidad de cumplimiento del objeto para el que fue creada.
- 8) Por otras causales previstas en las disposiciones legales aplicables en razón de la actividad de la cooperativa.

Artículo 94. (Efectos de la disolución).- Disuelta la cooperativa se procederá inmediatamente a su liquidación, salvo en los casos de fusión o incorporación. La cooperativa conservará su personería jurídica a ese solo efecto. Los liquidadores deben comunicar la disolución a la Auditoría Interna de la Nación y al Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Cooperativas, para su inscripción.

Artículo 95. (Órgano liquidador).- La liquidación en principio estará a cargo del Consejo Directivo, salvo disposición en contrario del estatuto o impedimento o imposibilidad para ejercer el cargo, caso en el cual la designación de la Comisión Liquidadora corresponderá hacerla a la Asamblea General o a la Auditoría Interna de la Nación. La Comisión Fiscal controlará el proceso de liquidación.

Artículo 96. (Facultades).- El órgano liquidador ejerce la representación de la cooperativa. Debe realizar el activo y cancelar el pasivo actuando con la denominación social y el aditamento en liquidación.

Artículo 97. (Distribución del remanente).- El remanente que resultare una vez pagadas las deudas y devuelto el valor de los aportes según las disposiciones de la presente ley, se entregará al Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP).

TÍTULO II

DE LAS COOPERATIVAS EN PARTICULAR

CAPÍTULO I

CLASES DE COOPERATIVAS

NORMAS COMUNES

Artículo 98. (Clasificación y normativa aplicable).- Las cooperativas pueden constituirse acogiéndose a cualquiera de las clases reguladas en el presente Título. Esa clasificación no obstará a la constitución de otras cooperativas, con tal de que quede determinada la actividad que desarrollarán y los derechos y las obligaciones de los socios, en cuyo caso se aplicará la normativa prevista para la clase de cooperativas con las que aquéllas guarden mayor analogía.

Cada cooperativa, además de ajustarse a los principios consagrados en la presente ley, y de regirse por las disposiciones de la Parte General (Título I), se regirá por las disposiciones especiales de la clase respectiva.

CAPÍTULO II

COOPERATIVAS DE TRABAJO

Artículo 99. (Definición y objeto).- Son cooperativas de trabajo las que tienen por objeto proporcionar a sus socios puestos de trabajo mediante su esfuerzo personal y directo, a través de una organización conjunta destinada a producir bienes o servicios, en cualquier sector de la actividad económica. La relación de los socios con la cooperativa es societaria.

Se consideran incluidas en la definición precedente, aquellas cooperativas que sólo tengan por objeto la comercialización en común de productos o servicios, siempre que sus socios no tengan trabajadores dependientes y el uso de medios de producción de propiedad del socio esté afectado exclusivamente al cumplimiento del objeto de la cooperativa.

Artículo 100. (Trabajadores en relación de dependencia).- El número de trabajadores en relación de dependencia no podrá superar el 20% (veinte por ciento) de los socios de la cooperativa. En cualquier caso, el mínimo de empleados podrá ser de dos. Estas limitaciones no rigen para los trabajadores contratados para cubrir necesidades cíclicas extraordinarias o de actividades de temporada.

Artículo 101. (Remuneración de los trabajadores socios).- Las remuneraciones mensuales de los socios de la cooperativa, a cuenta de los excedentes, no podrán ser inferiores al laudo y demás beneficios sociales que correspondan según la ley o el convenio colectivo aplicable a la actividad económica donde gire la cooperativa, con todos los beneficios sociales que legalmente correspondan.

Asimismo, percibirán la cuota parte de los excedentes anuales, en proporción a la cantidad y calidad del trabajo realizado por cada uno durante el ejercicio económico, descontando las remuneraciones percibidas por todo concepto, de acuerdo con lo establecido en el precedente inciso.

Artículo 102. (Legislación laboral y previsional).- Serán aplicables a todos los trabajadores, tengan o no la calidad de socios, las normas de protección de la legislación laboral y la previsión social, excepto la indemnización por despido a los socios excluidos.

Las cooperativas de trabajo no deberán realizar aportes patronales a la seguridad social, con excepción de los aportes al Fondo Nacional de Salud correspondientes a los trabajadores socios y no socios, y del aporte jubilatorio patronal correspondiente al personal dependiente.

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer un régimen ficto de aportación, como único aporte a la seguridad social, a aquellas cooperativas de trabajo cuyo volumen de actividad se encuadre en las condiciones que al respecto fije la reglamentación.

Artículo 103. (Fomento y tributación).- Las cooperativas de trabajo estarán exoneradas de todo tributo nacional, con excepción de lo dispuesto en el artículo anterior, del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Específico Interno.

Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer un régimen de excepciones y exoneraciones de tributos, creados o por crearse, destinado a fomentar el desarrollo de estas entidades cooperativas.

Artículo 104. (Promoción).- En todo caso de proceso liquidatorio concursal tendrán prioridad a los efectos de la adjudicación de la empresa como unidad, las cooperativas de trabajo que se constituyan con la totalidad o parte del personal de dicha empresa.

En tales casos y a solicitud de parte, el organismo de previsión social podrá disponer el pago al contado y por adelantado de los importes del subsidio por desempleo que les correspondiere a los trabajadores socios, siempre que los mismos sean destinados, en su totalidad, como aportación de partes sociales a la cooperativa a efectos de su capitalización.

Sin perjuicio, en los casos de empresas privadas a cuyo respecto se haya iniciado un proceso de liquidación, el Juez competente podrá designar depositaria de los bienes de la empresa, confiriendo facultades de uso precario de los mismos, a la cooperativa de trabajo que se haya constituido con la totalidad o parte del personal.

Artículo 105. (Suspensión temporaria de los laudos vigentes. Horas solidarias).- En los casos previstos en el artículo 104 de la presente ley, la cooperativa podrá, mediante resolución de la Asamblea General Extraordinaria convocada especialmente al efecto y

adoptada por una mayoría de por lo menos las 3/4 partes (tres cuartas partes) del total de socios de la cooperativa, resolver solicitar ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la suspensión de la aplicación del laudo de la rama de actividad en que gire la misma.

Dicha suspensión se aplicará solamente a los socios de la cooperativa y durante los tres primeros años de su funcionamiento si las circunstancias económicas y financieras así lo requiriesen, no pudiendo ser inferior al 70% (setenta por ciento) de los laudos correspondientes. También, luego del período referido anteriormente se podrá solicitar tal suspensión cuando se produzcan acontecimientos extraordinarios o imprevistos que pongan en peligro la posibilidad de cumplir con el objeto social.

La cooperativa deberá realizar la solicitud, por escrito, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con información que acredite el cumplimiento de las condiciones referidas en los incisos precedentes, debiendo, dicho Ministerio, expedirse en un plazo de sesenta días a contar del día siguiente al de la presentación, y significando la no expedición dentro de dicho plazo la aprobación tácita de la solicitud.

También en los casos previstos en el artículo 104, los socios de las cooperativas podrán realizar horas de trabajo solidarias de carácter gratuito, que no generan aporte alguno a la seguridad social. En estos casos, el ofrecimiento de los socios deberá constar por escrito, especificándose el tiempo y la excepcionalidad del servicio. La resolución aceptando la realización de horas solidarias deberá ser adoptada por la Asamblea General Extraordinaria con la mayoría establecida en el primer inciso de este artículo.

CAPÍTULO III

COOPERATIVAS DE CONSUMO

Artículo 106. (Definición y objeto).- Son cooperativas de consumo aquellas que tienen por objeto satisfacer las necesidades de consumo de bienes y servicios de sus socios, pudiendo realizar para ello todo tipo de actos y contratos.

Artículo 107. (Responsabilidad).- Las cooperativas de consumo solo podrán ser de responsabilidad limitada (literal A) del artículo 20 de la presente ley).

CAPÍTULO IV

COOPERATIVAS AGRARIAS

Artículo 108. (Definición y objeto).- Son cooperativas agrarias las que tienen por objeto efectuar o facilitar todas o algunas de las operaciones concernientes a la producción, transformación, conservación, clasificación, elaboración, comercialización, importación o exportación de productos provenientes de la actividad agraria en sus diversas formas, realizada en común o individualmente por sus miembros.

Artículo 109. (Actividad).- A los efectos de lo establecido en el artículo anterior podrán:

A) Realizar la adquisición, importación y empleo de máquinas, instrumentos y demás insumos necesarios para la explotación agraria.

B) Realizar todos los actos de administración y disposición necesarios para cumplir con sus fines específicos así como las necesidades sociales y económicas de sus integrantes. En la facultad establecida en este literal queda comprendida de modo expreso la adquisición y el arrendamiento de tierras y edificios para aprovechamiento en común y fraccionamiento de tierras para vender a sus socios.

C) Gestionar y administrar, en favor de sus socios, créditos de organismos nacionales, extranjeros e internacionales.

Artículo 110. (Socios).- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 de la presente ley, para ser socio de una cooperativa agraria se debe realizar la actividad agraria que requieran los estatutos.

Podrán ser socios de las cooperativas agrarias las sociedades civiles con contrato escrito, que realicen la actividad agraria que requieran los estatutos y las sociedades de fomento rural (Decreto-Ley N° 14.330, de 19 de diciembre de 1974).

Artículo 111. (Asociación y fusión).- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo VI (Título I) de la presente ley sobre asociación, fusión e incorporación, las cooperativas agrarias podrán asociarse o fusionarse con las sociedades a que hace referencia el Decreto-Ley N° 14.330, de 19 de diciembre de 1974.

Artículo 112. (Título ejecutivo).- Los saldos deudores de los socios con la cooperativa y de ésta respecto a aquellos se conformarán de acuerdo con lo que establezcan los estatutos.

Cumplido dicho procedimiento, constituirán título ejecutivo.

Artículo 113. (Envío de producción a la cooperativa).- Los estatutos podrán prever la facultad de la Asamblea General de establecer la obligación por parte de los socios, del envío total o parcial de su producción a la cooperativa.

Cuando ello así se estipule, la falta de cumplimiento de la citada obligación por parte del socio dará lugar a la sanción que establezca el estatuto.

Artículo 114. (Beneficios tributarios).- Las cooperativas agrarias estarán exentas en un 100% (cien por ciento) del Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales y en un 50% (cincuenta por ciento) de todo otro gravamen, contribución, impuestos nacionales directos o indirectos de cualquier naturaleza, con excepción del Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Específico Interno, de los aportes al Fondo Nacional de Salud de los trabajadores socios y no socios y del aporte jubilatorio patronal correspondiente al personal dependiente.

Facúltase al Poder Ejecutivo para reducir hasta en un 50% (cincuenta por ciento) la tasa del aporte jubilatorio patronal a las cooperativas agrarias.

Artículo 115. (Responsabilidad).- En las cooperativas agrarias la responsabilidad podrá ser limitada o suplementada según lo dispuesto por el artículo 20 de la presente ley, pero no regirá el límite previsto en el literal B) de dicho artículo, no obstante siempre deberá consignarse en el estatuto el monto suplementario por el que responderán los socios.

Artículo 116. (Fomento).- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, fomentará la creación de cooperativas agrarias y dispondrá una amplia difusión a ese fin y desarrollará programas de capacitación cooperativa.

El Estado deberá facilitar los medios y conceder todos los beneficios posibles para la exportación directa de los productos por las cooperativas agrarias. El Poder Ejecutivo podrá exonerar a éstas de todo tributo a la exportación creado o por crearse.

CAPÍTULO V

COOPERATIVAS DE VIVIENDA

Sección I

Disposiciones generales

Artículo 117. (Definición y objeto).- Las cooperativas de vivienda son aquellas que tienen por objeto principal proveer de alojamiento adecuado y estable a sus socios, mediante la construcción de viviendas por esfuerzo propio, ayuda mutua, administración directa o contratos con terceros, y proporcionar servicios complementarios a la vivienda.

Artículo 118. (Legislación aplicable).- Las cooperativas de vivienda se regularán por las disposiciones de la presente ley y por la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, y sus leyes modificativas en lo pertinente y en todo lo que no se oponga a la presente ley.

Artículo 119. (Principios).- Las cooperativas de vivienda, además de los principios consagrados en el artículo 7° de la presente ley, deberán observar los siguientes:

- 1) Suministrarán viviendas al costo, no admitiéndose ningún tipo de práctica especulativa.
- 2) Consagrarán que los excedentes no serán capitalizables en las partes sociales de los socios, ni podrán ser objeto de reparto entre los mismos.

Artículo 120. (Contenido del estatuto).- Además de lo dispuesto en el artículo 16 de la presente ley, los estatutos deben establecer:

A) Los criterios de adjudicación de las viviendas.

B) Que se requerirá como mínimo una mayoría de dos tercios de socios presentes para la modificación del estatuto y para la aprobación o reforma de los reglamentos internos.

C) Las elecciones de miembros del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscal se efectuarán en votación secreta y obligatoria y si se hiciese por lista, deberá aplicarse el principio de representación proporcional.

D) El carácter honorario de los integrantes de los órganos sociales. Se permite la representación del socio en cargos de la cooperativa, de carácter electivo por integrantes del núcleo habitacional, entendiéndose por éste las personas que cohabiten en forma permanente con el socio titular de la vivienda cooperativa, mayores de edad, debiendo ser el delegado votado por la masa social en la forma que dispone el presente artículo.

Artículo 121. (Representación).- En la Asamblea General, los socios podrán hacerse representar por otro socio o por un miembro del núcleo familiar, mediante poder escrito.

Artículo 122. (Retenciones).- Las cooperativas inscriptas en el Registro, que a tal efecto lleve el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, tendrán derecho de hacer retener de los sueldos, jornales, remuneraciones o pasividades de los socios, hasta el 20% (veinte por ciento) de los conceptos referidos, si la liquidación que realizase la cooperativa fuera conformada por la Dirección Nacional de Vivienda.

La liquidación practicada de conformidad con lo dispuesto por este artículo tendrá carácter de título ejecutivo y su ejecución se tramitará de acuerdo con lo previsto por el numeral 6) del artículo 353 y por el artículo 354 del Código General del Proceso.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, las infracciones en que incurran las empresas privadas en relación a su obligación de retención, serán sancionadas con una multa de entre cinco y diez veces el monto correspondiente a la retención que estaba obligada a realizar. Esta multa será aplicada por la Dirección Nacional de Vivienda y su producido se verterá al Fondo Nacional de Vivienda.

Artículo 123. (Aspectos patrimoniales).- Las partes sociales no podrán ser inferiores a 2 UR (dos unidades reajustables) y se reajustarán según dicho índice.

Los estatutos o reglamentos que se aprueben, podrán optar por la inclusión o no de los intereses del préstamo hipotecario en la parte social del cooperativista, no pudiendo

excluirse, en ningún caso, lo correspondiente a la amortización del capital del préstamo como aporte del socio.

Corresponden a la cooperativa las sumas que ésta perciba de parte de los socios como compensación por cuota de administración, cuota de mantenimiento de las viviendas y servicios comunes.

Dichos rubros no integran las partes sociales del cooperativista y, por lo tanto, no serán objeto de restitución al egreso ni de reparto entre los socios.

Artículo 124. (Trabajo de los socios).- Las cooperativas de vivienda podrán utilizar el trabajo de sus socios en la construcción de las viviendas, bajo sus dos modalidades, de autoconstrucción y de ayuda mutua.

La autoconstrucción es el trabajo puesto por el futuro propietario o usuario y sus familiares, en la construcción.

La ayuda mutua es el trabajo comunitario adoptado por los socios para la construcción de los conjuntos colectivos y bajo la dirección técnica de la cooperativa.

Tanto la autoconstrucción como la ayuda mutua deberán ser avaluadas para integrar la respectiva parte social y no darán lugar a aporte alguno a los organismos de previsión y seguridad social.

Artículo 125. (Disolución).- Para las cooperativas de vivienda las causales de los numerales 1) y 3) del artículo 93 de la presente ley, deberán resolverse en una Asamblea Extraordinaria convocada al efecto y por una mayoría de dos tercios de socios habilitados. Dichas causales no podrán ser invocadas a los efectos del ejercicio del derecho de renuncia.

Artículo 126. (Clasificación).- Las cooperativas de vivienda se clasificarán en unidades cooperativas de vivienda y cooperativas matrices de vivienda.

Sección II

De las unidades cooperativas de vivienda

Artículo 127. (Definición).- Son unidades cooperativas de vivienda las que constituidas por un mínimo de diez socios, tienen por finalidad proporcionar vivienda y servicios complementarios a los mismos, construyendo con ese objeto un inmueble o un conjunto habitacional o adquiriéndolo en los casos previstos en el artículo 131 de la presente ley.

Para el caso en que el objeto de la cooperativa se alcanzara a través de la realización de obras de mejoramiento, complementación y subdivisión en varias unidades de una vivienda existente (reciclaje) el número mínimo de socios se fija en seis.

Artículo 128. (Clasificación).- Las unidades cooperativas de vivienda pueden ser de usuarios o de propietarios.

Artículo 129. (Unidades cooperativas de usuarios).- Las unidades cooperativas de usuarios sólo atribuyen a los socios el derecho de uso y goce sobre las viviendas sin limitación de tiempo.

Artículo 130. (Unidades cooperativas de propietarios).- Las unidades cooperativas de propietarios atribuyen la propiedad exclusiva e individual de la propiedad horizontal, sobre las respectivas viviendas, pero con facultades de disponibilidad y uso limitadas, según lo que prescriben los artículos 146 y 147 de la presente ley.

Las cooperativas de propietarios pueden retener la propiedad de las viviendas, otorgando el uso a los futuros propietarios, mientras éstos amortizan el costo de la vivienda.

Artículo 131. (Adquisición de inmuebles).- Sólo podrán adquirir inmuebles o conjuntos habitacionales ya construidos las unidades cooperativas de usuarios y exclusivamente en los siguientes casos:

A) Cuando se trate de un inmueble o conjunto habitacional construido por uno de los organismos de derecho público a que hace referencia el artículo 112 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, siempre que el proyecto de estatuto sea sometido a la aprobación del mismo.

B) Cuando se trate de una cooperativa formada por inquilinos de un inmueble construido según permiso aprobado con anterioridad a la vigencia de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, con la finalidad de adquirir dicho inmueble según el régimen establecido por el artículo 128 de la presente ley.

Artículo 132. (Reducción de órganos).- Las unidades cooperativas de vivienda cuyo número de socios sea inferior a veinte podrán reducir sus órganos al Consejo Directivo y a la Asamblea General. En ese caso las funciones establecidas para la Comisión Fiscal y la de Educación, Fomento e Integración Cooperativa serán desempeñadas por la Asamblea General. Si el estatuto no estableciese la solución indicada, podrá adoptarse la misma por resolución de la Asamblea General por una mayoría de dos tercios de presentes.

Artículo 133. (Registro).- Obtenida la personería jurídica, las cooperativas de vivienda deberán inscribirse en el registro que llevará el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. En el mismo Registro se inscribirán también los institutos de asistencia técnica.

Lo dispuesto en el presente artículo es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 213 de la presente ley.

Artículo 134. (Licitaciones y programa habitacional).- Las cooperativas de vivienda podrán participar en todas las licitaciones y llamados a presentación de propuestas que realice el sistema público de vivienda, conjuntamente con los institutos de asistencia técnica a que refiere la Sección VI de este capítulo, siendo requisito que la cooperativa y su instituto técnico figuren inscriptos en el registro del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Para ser adjudicatarios de un programa habitacional financiado por el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización, así como para obtener alguno de los préstamos de vivienda de los previstos en la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre 1968, o en otras disposiciones legales, la cooperativa deberá cumplir con los siguientes extremos:

A) Todos los socios deben cumplir con los topes de ingreso, situación familiar y otros requisitos que determine el organismo financiador o quien llame a licitación.

B) La propuesta u oferta debe sujetarse estrictamente y en todos los términos a las condiciones del llamado.

C) La propuesta técnico-arquitectónica, el plan de obras y el plan de financiación serán ratificados, además por el instituto de asistencia técnica que se hace corresponsable de la misma.

Sección III

De los usuarios

Artículo 135. (Documento de uso y goce).- Cuando se trate de unidades cooperativas de usuarios la cooperativa suscribirá, en ejercicio del acto cooperativo, con cada uno de los socios adjudicatarios y con carácter previo a la adjudicación de las respectivas

viviendas un "documento de uso y goce", que tendrá una duración indefinida mientras las partes cumplan con sus obligaciones.

El "documento de uso y goce" se otorgará en instrumento público o privado y deberá ser inscripto en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Cooperativas.

Artículo 136. (Destino).- Los socios deberán destinar la respectiva vivienda adjudicada para residir con su familia y no podrán arrendarla o cederla -directa o indirectamente- siendo nulo todo arrendamiento o cesión, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes.

Si el socio no destinara la vivienda adjudicada para residencia propia y de sus familiares, será causa suficiente para la pérdida de la calidad de socio.

Artículo 137. (Derecho de uso).- La calidad de socio y consecuentemente el derecho de uso se terminarán:

A) Por el retiro voluntario del socio o de sus herederos mediante renuncia.

B) Por expulsión del socio a consecuencia del incumplimiento en el pago de las correspondientes amortizaciones o por falta grave a sus obligaciones de socio.

C) Por disolución de la sociedad.

En caso de renuncia, anulación o conclusión por otra causa de los derechos de los socios, los mismos deberán desocupar la vivienda dentro de los noventa días de ocurrido el hecho.

La cooperativa dispondrá de un plazo de doce meses, desde la restitución de la vivienda, para hacer efectivo el pago del 50% (cincuenta por ciento) del reintegro a que tuviera derecho. El 50% (cincuenta por ciento) restante deberá hacerse efectivo en forma posterior a que sea designado el nuevo socio que lo sustituya, pero no más tarde de tres años a partir del vencimiento del plazo anterior.

Las cooperativas de vivienda aprobarán el ingreso de nuevos socios por el procedimiento de selección, de acuerdo a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

Artículo 138. (Retiro).- El retiro voluntario, desde el ingreso a la cooperativa y hasta los diez años de adjudicada la vivienda, deberá solicitarse, ante el Consejo Directivo, con la fundamentación correspondiente.

Si el retiro se considera justificado, el socio tendrá derecho a un reintegro equivalente al valor de tasación de su parte social, menos los adeudos que correspondiera deducir y menos un 10% (diez por ciento) del valor resultante.

Si el retiro no se considera justificado la deducción establecida podrá alcanzar entre el 25% (veinticinco por ciento) y el 50% (cincuenta por ciento) del valor resultante, según lo establezca la reglamentación, sin perjuicio del descuento de los adeudos del socio.

Los retiros posteriores a los diez años de adjudicación de la vivienda, se regirán por el estatuto o el reglamento y los reintegros de las partes sociales a restituir, no serán abatidos en menos de un 10% (diez por ciento) de la parte social.

Cuando ocurrieren desinteligencias entre los usuarios y la cooperativa, en cuanto a la naturaleza del retiro o a las sumas que por tal concepto se adeudan, resolverá el diferendo el Juez competente.

Artículo 139. (Partes sociales).- Las partes sociales se integrarán con los aportes en trabajo (ayuda mutua o autoconstrucción) o el ahorro previo, según la modalidad adoptada, el aporte inicial, aportes extraordinarios y lo abonado por concepto de amortización del préstamo hipotecario. En este caso, las cooperativas podrán decidir, si se capitaliza al socio, sólo lo abonado por concepto de capital o además, lo pagado por concepto de intereses del préstamo obtenido.

Artículo 140. (Exclusión del socio).- La exclusión del socio, cuando incurra en incumplimiento que constituya falta grave o la incursión en reiteradas faltas medianas, se tramitará de la siguiente forma:

A) Desde el ingreso a la cooperativa y hasta la adjudicación de la vivienda, la aplicación de la exclusión, será resuelta por el Consejo Directivo, mediante información sumaria y oyendo al interesado. La decisión de dicho órgano será pasible de impugnación mediante los recursos de reconsideración y apelación en subsidio, que se interpondrán conjuntamente, dentro de los diez días hábiles y perentorios de notificada la misma al socio.

El Consejo Directivo dispondrá de un plazo de quince días hábiles para expedirse sobre la reconsideración y si mantuviese la decisión impugnada o no adoptara decisión dentro del término fijado, elevará automáticamente las actuaciones a la Asamblea General, a la que convocará dentro de los sesenta días siguientes al vencimiento del término expresado.

Para la aplicación de la exclusión se deberá realizar la Asamblea General, la cual podrá revocar la decisión del Consejo Directivo por mayoría de dos tercios de presentes. En caso contrario se tendrá por confirmada dicha decisión.

Las sanciones se harán efectivas una vez transcurridos los plazos para su impugnación o agotada, en su caso, la sustanciación de los recursos interpuestos.

Los estatutos y los reglamentos preverán los mecanismos de aplicación de las demás sanciones.

B) Luego de adjudicada la vivienda, corresponde la previa tramitación de los procesos jurisdiccionales, según decida el Consejo Directivo, que se enuncian a continuación:

1) El incumplimiento en el pago de aportaciones que corresponden a la amortización de la vivienda, de capital social, fondos legales y reglamentarios y de toda otra suma que deba abonarse a la cooperativa por el socio, dará lugar al procedimiento de desalojo, según lo dispuesto por las leyes de arrendamientos urbanos, para el arrendatario mal pagador, salvo lo dispuesto en el inciso siguiente.

Toda vez que el socio afronte dificultades para el pago de la correspondiente cuota de amortización, debido a causas que no le sean imputables, la cooperativa procurará resolver el problema ya sea gestionando el subsidio oficial si correspondiere o mediante un fondo de socorro, destinado a cubrir las momentáneas dificultades financieras de los socios y que podrán constituir las cooperativas de vivienda. En ambos casos, sólo se atenderán las situaciones en que el amparo hubiese sido solicitado a la cooperativa por el socio, con anterioridad a la acción promovida.

2) El incumplimiento grave de sus obligaciones con la cooperativa, que perjudique a la institución o a los demás socios, podrá determinar que sea solicitada la exclusión del socio y la rescisión del "documento de uso y goce" ante Juez competente y por los mismos trámites que para los arrendamientos urbanos.

Mientras dure el juicio, el socio podrá ser suspendido por resolución del Consejo Directivo, apelable a la Asamblea General, en sus derechos como integrante de la cooperativa, salvo aquellos inherentes a su calidad de usuario. Si no hay lugar a la exclusión, el socio reasumirá plenamente sus derechos.

3) En ambos procesos la remisión se extenderá, en lo relativo a la competencia y al emplazamiento, a lo que dispone el inciso final del artículo 20 del Decreto-Ley N° 14.219, de 4 de julio de 1974. Bastará para deducir el accionamiento la decisión del Consejo Directivo.

Amparada la pretensión procesal de la cooperativa, por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, que equivale a exclusión del cooperativista, se registrará en los libros sociales respectivos y se inscribirá en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Cooperativas, dándose por rescindido todo vínculo con la cooperativa.

Se podrá abatir de la parte social a reintegrar, al excluido o perdidoso del juicio, un porcentaje del 50% (cincuenta por ciento) al 75% (setenta y cinco por ciento), siempre que ello surja de los estatutos o de reglamentos aprobados con antelación no menor a un año de la promoción del litigio, si el plazo fuere menor, se aplicará el descuento establecido para renuncia injustificada.

Si se suscitasen diferencias en el monto a reintegrar, se determinará el mismo en la forma establecida en el artículo 138 de la presente ley.

Artículo 141. (Fallecimiento del socio).- En caso de fallecimiento del socio, los herederos podrán optar por continuar en el uso y goce de la vivienda, en cuyo caso subrogarán al causante en todos sus derechos y obligaciones, debiendo designar a uno de ellos como socio titular o por retirarse de la cooperativa, recibiendo el valor de sus partes sociales.

Cuando los herederos optaren por continuar en el uso de la vivienda, el valor patrimonial de la misma estará exento de todo impuesto nacional.

En caso de disolución de matrimonio o de la unión concubinaria reconocida judicialmente, tendrá preferencia para continuar en el uso y goce, aquel cónyuge o concubino que conserve la tenencia de los hijos, sin perjuicio de las compensaciones que correspondieren.

Artículo 142. (Aportes).- Los socios aportarán, mensualmente, las cuotas correspondientes a la amortización de la vivienda, cuyo monto se reajustará en unidades reajustables y el estatuto o el reglamento podrán resolver la consideración de la integración o no, a la parte social de cada socio, de los intereses del préstamo hipotecario, debiéndose, en forma preceptiva, capitalizar lo abonado por concepto de amortización, destinado a pago de capital.

Los socios aportarán igualmente, en forma mensual, una suma adicional destinada a cubrir los gastos de administración, de mantenimiento y demás servicios que suministre la cooperativa a los usuarios. Esta suma adicional no integra la parte social y, en consecuencia, no es reintegrable. El atraso reiterado en el pago de esta suma adicional, será considerado causal suficiente para la exclusión del socio o la promoción de juicio de rescisión del documento de uso y goce, según corresponda.

Artículo 143. (Obligaciones de la cooperativa).- La cooperativa pondrá a los socios en posesión material de sus respectivas unidades de vivienda adjudicadas, los mantendrá en el ejercicio de sus derechos, los defenderá en las posibles perturbaciones de los terceros y pagará los préstamos, intereses, contribuciones, reparaciones y demás obligaciones y servicios comunes, de acuerdo a lo previsto en la presente ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes.

Artículo 144. (Reparaciones y exoneración).- Serán de cargo de la cooperativa todas aquellas reparaciones que derivan del uso normal de la vivienda y no se producen por culpa del usuario, en los cinco primeros años luego de la adjudicación y posteriormente, si tuviese los fondos creados a tal efecto, por sus órganos sociales.

Las viviendas de interés social que, según el régimen de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, se otorguen en uso y goce a los socios de cooperativas gremiales o locales, no pagarán impuesto alguno que grave la propiedad del inmueble.

Artículo 145. (Normas supletorias).- Para regular las relaciones entre la cooperativa y los usuarios se aplicarán en todo lo que no se oponga a la presente ley, las disposiciones del Código Civil relativas al arrendamiento.

Sección IV

De los propietarios

Artículo 146. (Retención de la propiedad).- En las unidades cooperativas de propietarios, la cooperativa podrá retener la propiedad de las viviendas mientras dure la amortización de los créditos si así lo establecen los estatutos. En ese caso, los futuros propietarios regularán sus relaciones con la cooperativa por las normas establecidas en este capítulo en lo que les fuere aplicable, pero sin los beneficios que otorga el inciso segundo del artículo 144 de la presente ley.

Las cooperativas de propietarios efectuarán la novación del crédito hipotecario, previa Asamblea con mayoría calificada de 2/3 (dos tercios) de los socios y hasta ese momento se registrarán, igualmente que en el inciso anterior, por las disposiciones que regulan a las cooperativas de usuarios.

A partir del momento en que se efectúe la novación del préstamo hipotecario, los socios podrán o no continuar integrando la cooperativa, según lo establezcan sus estatutos, pero serán deudores directos por los créditos hipotecarios que se les hubieren otorgado.

Artículo 147. (Indisponibilidad).- Los propietarios deberán destinar la vivienda para residencia propia y de su familia y no podrán arrendarla o enajenarla, salvo con causa justificada y previa autorización del organismo financiador. Las operaciones realizadas en contravención de esta disposición serán ineficaces y pasibles de las multas previstas en el artículo 46 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.

Sección V

De las cooperativas matrices de vivienda

Artículo 148. (Definición).- Son cooperativas matrices de vivienda aquellas que reciben en forma abierta la inscripción de socios mediante un compromiso de aportes sistemáticos de ahorro y con la finalidad de asistirlos en la organización de unidades cooperativas de vivienda, en la decisión y realización de sus programas de obtención de créditos, adquisición de terrenos, proyectos, construcción y adjudicación de viviendas y ejercer las funciones que en ellas deleguen, a esos fines, las unidades cooperativas filiales.

Artículo 149. (Ámbito).- Las cooperativas matrices de vivienda actuarán limitadas a un gremio o a un ámbito territorial determinado y se denominarán, respectivamente, gremiales o locales.

La reglamentación determinará las condiciones que deberán reunir los grupos gremiales o locales para ser considerados tales a los efectos de la presente ley.

Artículo 150. (Socios sin vivienda).- Las cooperativas matrices de vivienda no podrán superar el número de mil socios sin vivienda adjudicada, salvo que la Dirección Nacional de Vivienda lo autorice en consideración al interés general y siempre que se encuentren garantizados los derechos de los socios.

Artículo 151. (Criterios).- La reglamentación fijará los criterios generales que regularán el derecho de los socios a recibir viviendas. Estos criterios deberán tener en cuenta por lo menos, la antigüedad del socio, su cumplimiento de las obligaciones de tal, sus cargas familiares y su situación habitacional.

Artículo 152. (Unidades cooperativas).- Por cada inmueble o conjunto habitacional cuya construcción decida, la cooperativa matriz deberá organizar con los destinatarios de las viviendas una unidad cooperativa.

Estas unidades cooperativas permanecerán ligadas a la cooperativa matriz en calidad de filiales por lo menos hasta que hayan adjudicado definitivamente las viviendas y cancelado sus deudas con la misma.

Entretanto la cooperativa matriz estará obligada a prestarles asistencia técnica y financiera y tendrá sobre ellas el contralor que la reglamentación establezca.

Artículo 153. (Proyecto urbanístico y edilicio).- Las cooperativas matrices en caso de promover grandes conjuntos habitacionales, deberán establecer un proyecto urbanístico y edilicio de conjunto.

Los lineamientos generales de estos proyectos deberán ser respetados por las unidades cooperativas filiales.

Artículo 154. (Licitaciones).- Las cooperativas matrices de vivienda podrán participar en licitaciones y llamados de presentación de propuestas que realice el sistema público en representación de sus unidades cooperativas, debiendo cumplir con todas las condiciones establecidas por el artículo 134 de la presente ley.

Artículo 155. (Elecciones).- En la elección de autoridades participarán solamente los socios que aún no tengan vivienda adjudicada, pero podrán ser electos para los cargos directivos todos los socios que permanezcan vinculados a la cooperativa, directamente o a través de las unidades cooperativas filiales.

Sección VI

De los institutos de asistencia técnica

Artículo 156. (Definición).- Son institutos de asistencia técnica aquellos destinados a proporcionar al costo servicios jurídicos, de educación cooperativa, financieros, económicos y sociales a las cooperativas y otras entidades sin fines de lucro, pudiendo incluir también los servicios técnicos de proyecto y dirección de obras.

Artículo 157. (Personería y forma).- Estos institutos deberán obtener la personería jurídica y constituirse bajo una modalidad societaria, cooperativa o asociativa.

Artículo 158. (Estatutos).- Los estatutos de estos institutos establecerán necesariamente:

A) Denominación y domicilio.

B) Servicios que prestan a las cooperativas.

C) Organización interna.

Artículo 159. (Costos máximos).- La reglamentación determinará los costos máximos de los servicios que proporcionan los institutos de asistencia técnica, no pudiendo sobrepasar en ningún caso el 7% (siete por ciento) del valor total de las obras en caso de proporcionarse la totalidad de los servicios indicados en el artículo 156 de la presente ley.

Artículo 160. (Excedentes).- Los institutos de asistencia técnica no podrán distribuir excedentes si los obtuvieran, debiendo emplearlos exclusivamente en la realización de su objeto social. Todas las retribuciones que paguen estarán sujetas a la reglamentación y control de la Dirección Nacional de Vivienda.

Artículo 161. (Sanciones).- El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente podrá solicitar ante los organismos competentes la suspensión o retiro de la personería jurídica a los institutos de asistencia técnica, en atención a la configuración de las siguientes causales y según la gravedad de las infracciones que constate, y sin perjuicio de las sanciones que en función a lo expuesto corresponda aplicar:

A) Por exceder los topes fijados legalmente en la percepción de las retribuciones por sus servicios.

B) Por la insolvencia técnica determinada por técnicos de dicho Ministerio.

C) Por realizar o respaldar actividades contrarias a la finalidad cooperativa o actuar en cualquier forma al servicio de terceros en perjuicio del interés de las cooperativas asistidas.

D) Por las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la reglamentación a los servicios que obligatoriamente deben prestar a las cooperativas que contraten sus servicios.

E) Por no presentar en los plazos estipulados la documentación que le sea requerida por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que esté referida a la competencia legal del mismo y en función de la reglamentación vigente o por no llevar la misma en la forma en que legal o contablemente corresponda.

Cuando se configure alguna infracción, el Ministerio indicado tendrá las más amplias facultades de investigación, pudiendo disponer la suspensión de la personería jurídica por un plazo que no excederá de un año y, en función de la gravedad constatada, podrá disponer el retiro de la personería jurídica sin perjuicio de la aplicación de las multas que en función de dichos hechos resulten aplicables.

Las multas no serán inferiores a 10 UR (diez unidades reajustables) ni mayores de 1.000 UR (mil unidades reajustables), a cuyos efectos la reglamentación establecerá la forma en que las mismas se graduarán.

Los técnicos que integren un instituto que sea objeto de sanción, en tanto la misma se encuentre vigente, no podrán intervenir o participar en cualquier otro instituto de similar naturaleza mientras la multa aplicada no hubiere sido cancelada y el plazo de la sanción vencido. La reiteración de una circunstancia de esta naturaleza determinará la imposibilidad de integrar otro instituto por el plazo de cinco años.

Serán solidariamente responsables del pago de la multa aplicada a los institutos de asistencia técnica sancionados todos los integrantes del mismo.

Los institutos de asistencia técnica deberán presentar conjuntamente con toda la documentación la lista de los integrantes responsables del mismo.

CAPÍTULO VI COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Artículo 162. (Objeto).- Son cooperativas de ahorro y crédito aquellas que tienen por objeto promover el ahorro de sus socios y proporcionarles créditos y otros servicios financieros.

Artículo 163. (Clases).- Las cooperativas de ahorro y crédito podrán ser de intermediación financiera o de capitalización. Son de intermediación financiera las que tienen por objeto realizar tal actividad, estando comprendidas en el ámbito de aplicación del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, modificativas, complementarias o concordantes, y sometidas en lo pertinente al contralor del Banco Central del Uruguay (BCU) y de los demás organismos de contralor previstos en la presente ley.

Son de capitalización aquellas cuyo objeto principal es operar con los aportes sistemáticos de capital de sus asociados, no pudiendo recibir depósitos de sus socios ni de terceros, por lo que no están sometidas al contralor del BCU.

Artículo 164. (Participaciones subordinadas y participaciones con interés).- Las participaciones subordinadas y las participaciones con interés formarán parte del patrimonio esencial y contable de la cooperativa.

Artículo 165. (Requisitos).- Las cooperativas de ahorro y crédito, además de cumplir con todas las disposiciones de esta ley, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1) Estar constituidas inicialmente por un número de personas no inferior a cincuenta y contar con más de doscientos socios activos al vencimiento de dos años contados desde la fecha de su fundación, entendiéndose por socio activo al que esté al día con sus obligaciones económicas y con las partes sociales integradas que fije la Asamblea General. Las cooperativas actualmente existentes que no alcancen esos mínimos, dispondrán del plazo de dos años a partir de la vigencia de la presente ley para el logro de los mismos.

2) En las cooperativas de capitalización, ningún socio a título individual o conjuntamente con su grupo económico o familiar, podrá ser titular de más de un 10% (diez por ciento) de las partes sociales de la cooperativa. En el caso de socios que sean cooperativa u otra persona jurídica sin fines de lucro, este porcentaje podrá alcanzar un máximo de un 15% (quince por ciento).

3) Las cooperativas de capitalización podrán contraer sus pasivos financieros con:

- A) Instituciones supervisadas por el Banco Central del Uruguay.
- B) Instituciones pertenecientes al movimiento cooperativo nacional o internacional.
- C) Bancos estatales o instituciones sin fines de lucro.
- D) El Estado.
- E) La Corporación Nacional para el Desarrollo.
- F) Organismos internacionales.
- G) Fideicomisos financieros o de garantía administrados por fiduciarios de reconocida solvencia técnica a juicio de la Auditoría Interna de la Nación.

La Auditoría Interna de la Nación podrá considerar otra fuente de financiamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

4) El monto de los créditos que se otorguen a cada socio individualmente o a su grupo económico o familiar en su conjunto no exceda:

A) En el caso de las cooperativas de capitalización el equivalente al 10% (diez por ciento) del patrimonio de la entidad. Tratándose de socios que sean cooperativa u otras personas jurídicas sin fines de lucro, se podrá alcanzar un máximo del 15% (quince por ciento). En el caso en que se radiquen fondos en las cooperativas, provenientes de cualquiera de las fuentes previstas en el numeral 3) del presente artículo, con destino exclusivo al otorgamiento de créditos a los socios que realicen actividades de micro, pequeñas o medianas empresas, no regirán las limitaciones previstas en este numeral.

B) En las cooperativas de intermediación financiera los límites que establezcan las normas del Banco Central del Uruguay.

5) Celebren regularmente sus Asambleas Generales ordinarias anuales, para cuya validez y funcionamiento será siempre necesaria la presencia de un número de socios no inferior al 10% (diez por ciento) de los socios activos, según se definen en el numeral 1) de este artículo en primera convocatoria y el 5% (cinco por ciento) de los mismos o treinta socios activos (el menor de ambos) en segunda convocatoria, controladas por los organismos de

contralor previstos en la presente ley. En caso de tratarse de asambleas de delegados, si el estatuto lo prevé, las mismas deberán constituirse con no menos de cincuenta delegados y su quórum mínimo será del 50% (cincuenta por ciento).

Lo dispuesto en el presente artículo es sin perjuicio de lo establecido en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley N° 18.212, de 5 de diciembre de 2007, sobre tasas de interés y usura.

Artículo 166. (Contralor).- Sin perjuicio de las sanciones que puedan aplicar la Auditoría Interna de la Nación o el Banco Central del Uruguay, según corresponda, el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 de la presente ley o se constate la violación de los principios cooperativos establecidos en el artículo 7° de la presente ley, podrán ameritar la pérdida del derecho a gozar de las exoneraciones tributarias y del derecho de retención, según la gravedad del incumplimiento o de la infracción y sin perjuicio de la posibilidad sustancial y temporal de su subsanación. A sus efectos el órgano de contralor comunicará a la Dirección General Impositiva e intimará judicialmente a la cooperativa incumplidora el cese inmediato de la percepción de las sumas retenidas en virtud de lo dispuesto en las normas de retención aplicables a las cooperativas de ahorro y crédito, siguiéndose en lo pertinente el procedimiento del juicio extraordinario.

Artículo 167. (Presentación de estados contables).- Las cooperativas de intermediación financiera presentarán sus estados contables ante el Banco Central del Uruguay y entregarán copias de los mismos, con constancia de lo anterior, a la Auditoría Interna de la Nación.

Artículo 168. (Prohibición).- La prohibición establecida en el literal C) del artículo 18 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, no se aplicará a los socios de cooperativas de ahorro y crédito de intermediación financiera que integren cargos de dirección, fiscalización o asesoramiento en las mismas.

Artículo 169. (Servicios de protección).- Las cooperativas de ahorro y crédito podrán establecer servicios de protección de sus ahorros y créditos para el caso de fallecimiento o incapacidad del socio.

CAPÍTULO VII COOPERATIVAS DE SEGUROS

Artículo 170. (Definición y objeto).- Son cooperativas de seguros las que tienen por objeto la actividad aseguradora y reaseguradora en cualquiera de sus ramas. Se regirán por lo dispuesto en esta ley y por la normativa pertinente en materia de seguros.

CAPÍTULO VIII COOPERATIVAS DE GARANTÍA RECÍPROCA

Artículo 171. (Definición y objeto).- Son cooperativas de garantía recíproca las que tienen por objeto la prestación de servicios de garantía o aval o fianza para respaldar operaciones de sus miembros, pudiendo brindar también servicios de asesoramiento.

CAPÍTULO IX COOPERATIVAS SOCIALES

Artículo 172. (Definición y objeto).- Las cooperativas sociales son aquellas cooperativas de trabajo que tienen por objeto proporcionar a sus socios un puesto de trabajo para el desarrollo de distintas actividades económicas, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, con el fin de lograr la inserción social y laboral de los jefes y jefas de hogares pertenecientes a sectores con necesidades básicas insatisfechas, jóvenes, discapacitados, minorías étnicas y todo grupo en situación de extrema vulnerabilidad social.

Artículo 173. (Legislación aplicable).- Las cooperativas sociales se regirán en lo no previsto por las disposiciones de la presente ley aplicables a las cooperativas de trabajo.

Artículo 174. (Requisitos).- Para ser calificada como cooperativa social se deberán cumplir los siguientes requisitos:

A) Constar en el estatuto que en los ejercicios económicos en que existen excedentes luego de cancelados todos los gastos de la cooperativa, aquéllos deberán destinarse a crear reservas o a la consolidación y mejora del servicio prestado o, hasta en un 20% (veinte por ciento), a fines de progreso social, educativo y cultural de sus integrantes y en ningún caso serán repartidos entre los socios.

B) También constará en el estatuto el carácter gratuito del desempeño de todos los cargos de dirección, sin perjuicio de la restitución de gastos que puedan generarse por el cumplimiento de tales funciones.

C) Las retribuciones de los socios trabajadores y de los trabajadores no socios no podrán superar las retribuciones que, en función de la actividad y categoría profesional, establezca el convenio colectivo aplicable de la rama de actividad o el que guarde mayor analogía.

La inobservancia así como el incumplimiento de los requisitos establecidos precedentemente determinará la pérdida de la calificación como cooperativa social, debiendo acceder a otra modalidad a los efectos de mantener la condición de cooperativa.

D) Un mínimo de 75% (setenta y cinco por ciento) de los socios deberá pertenecer a sectores en situación de vulnerabilidad social.

Artículo 175. (Socios).- Podrán ser socios las personas físicas mayores de edad y las personas menores de edad o incapaces por medio de sus representantes legales, ya sean los padres, tutores o curadores, no requiriéndose en ningún caso autorización judicial.

La administración y representación de la cooperativa deberá ser ejercida por los socios mayores de edad. En el caso en que la cantidad de socios mayores no sea suficiente para cubrir los cargos directivos, o que todos los socios de la cooperativa sean menores de edad o incapaces, podrán éstos ser designados para ejercer la administración y la representación de la cooperativa, en cuyo caso la realizarán por medio de sus representantes legales.

Artículo 176. (Control y registro).- Las cooperativas sociales en forma previa a la inscripción de sus estatutos en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Cooperativas, deberán presentarlos al Ministerio de Desarrollo Social, con el fin de que éste verifique si la composición de la cooperativa se corresponde con lo establecido en el artículo 172 y si se cumplen los requisitos previstos en los artículos 174 y 175 de esta ley.

A tales efectos el Ministerio de Desarrollo Social dispondrá de un plazo de treinta días para expedirse.

Asimismo, dicho Ministerio tendrá facultades para controlar el cumplimiento de los referidos requisitos durante el funcionamiento de la cooperativa, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Artículo 177. (Formación para la gestión).- Todos los socios de la cooperativa social recibirán la capacitación en los postulados y principios cooperativos y en los diversos aspectos específicos del rubro en que desarrolle su actividad, así como la asistencia técnica para la gestión que garantice la viabilidad socioeconómica de sus proyectos y su sostenibilidad.

Artículo 178. (Fomento).- Se declara de interés general el fomento de las cooperativas sociales. Las mismas quedan exoneradas de todo tributo nacional, incluido todo aporte patronal a la seguridad social, y el correspondiente al Fondo Nacional de Salud.

Artículo 179.- Se mantienen vigentes los artículos 8º, 9º y 10 de la Ley Nº 17.978, de 26 de junio de 2006.

CAPÍTULO X

COOPERATIVA DE ARTISTAS Y OFICIOS CONEXOS

Artículo 180. (Definición y objeto).- Las cooperativas de artistas y oficios conexos, son aquellas cooperativas de trabajo constituidas por personas físicas calificadas como artistas intérpretes o ejecutantes, así como por aquellas que desarrollen actividades u oficios conexos a las mismas.

Podrán integrar este tipo de cooperativas las personas físicas inscriptas en el Registro Nacional de Artistas y Actividades Conexas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 181. (Producciones o servicios).- Las cooperativas de artistas y oficios conexos regularán sus producciones o servicios de conformidad con los contratos que celebren y por las disposiciones civiles o comerciales que les resulte aplicables.

Artículo 182. (Régimen de trabajo).- El régimen de trabajo de la cooperativa será acordado entre sus socios. En caso de ausencia de acuerdo se registrá por los usos y costumbres.

Artículo 183. (Aportación previsional).- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 102 de la presente ley, los socios aportarán por los períodos efectivos de actividad y en base a las remuneraciones realmente percibidas.

Artículo 184. (Legislación supletoria).- Las cooperativas de artistas y oficios conexos se regirán en lo no previsto en este capítulo, por las disposiciones de la presente ley aplicables a las cooperativas de trabajo.

TÍTULO III

CAPÍTULO I

DE LA PROMOCIÓN DE LAS COOPERATIVAS

Sección I

Compromiso, forma jurídica, competencias y relacionamiento con el Poder Ejecutivo

Artículo 185. (Promoción).- El Estado promoverá la aprobación de políticas públicas orientadas al sector cooperativo y de la economía social en general, facilitará el acceso a fuentes de financiamiento públicas y privadas y brindará el apoyo de sus diferentes Ministerios y áreas en todo programa que sea compatible con los contenidos en los planes de desarrollo cooperativo.

Artículo 186. (Creación del Instituto Nacional del Cooperativismo).- Créase el Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOOP) como persona jurídica de derecho público no estatal, con domicilio en el departamento de Montevideo, para la proposición, asesoramiento y ejecución de la política nacional del cooperativismo.

El INACOOOP se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 187. (Cometidos).- El Instituto que se crea, para el cumplimiento del fin expuesto, tendrá como objetivo promover el desarrollo económico, social y cultural del sector cooperativo y su inserción en el desarrollo del país.

El Instituto Nacional del Cooperativismo tendrá, en la materia de su competencia, todos los cometidos conducentes al cumplimiento de sus objetivos en relación al sector cooperativo y especialmente los siguientes:

A)Proponer políticas públicas y sectoriales y asesorar preceptivamente a los poderes públicos en la materia cooperativa.

B)Promover y promocionar el cumplimiento de los valores y principios cooperativos.

C)Formular los planes de desarrollo cooperativo a nivel nacional y realizar las evaluaciones de los resultados obtenidos de su aplicación.

D)Coordinar la formulación, articulación y ejecución de los programas del Plan Nacional de Desarrollo Cooperativo, con aquellos de las unidades ejecutoras de los diferentes Ministerios y entidades públicas que tengan alcance y/o incidencia sobre el sector.

E)Preparar, organizar y administrar programas, recursos e instrumentos para la promoción y el fomento del desarrollo del sector cooperativo.

F)Definir políticas y formular programas de formación para la generación de capacidades de dirección y administración económica-financiera y de gestión social de las cooperativas.

G)Definir, coordinar e implementar estudios de investigación, creando un sistema nacional de información público sobre el sector cooperativo.

H)Realizar la evaluación de la incidencia de la gestión de las cooperativas en la economía y la sociedad.

I)Promover la enseñanza del cooperativismo en todos los niveles de la educación pública y privada.

J)Promover la investigación en materia cooperativa, la formación y la capacitación de los cooperativistas.

K)Promover procesos asociativos, integradores y participativos en las cooperativas, entre ellas y en sus organizaciones superiores.

L)Comunicar e informar públicamente sobre la temática cooperativa.

M)Impulsar el estudio y la investigación de otras formas de la economía social y solidaria y realizar propuestas sobre su alcance y regulación, de modo de favorecer la formación de un marco jurídico que facilite su desarrollo y promoción.

Artículo 188. (Atribuciones).- Son atribuciones específicas del Instituto Nacional del Cooperativismo, sin perjuicio de las que le correspondan de acuerdo a su estatuto legal, las siguientes:

A)Relacionarse con los poderes públicos, órganos del artículo 220 de la Constitución de la República, demás empresas del dominio comercial e industrial del Estado y empresas, personas y organizaciones del sector cooperativo y privado en general, a fin de dar cumplimiento a sus cometidos.

B)Coordinar con las empresas y organizaciones del sector cooperativo y con las dependencias públicas y, en general, con las personas y entidades involucradas, la implementación de los programas y planes de desarrollo cooperativo.

C)Asumir, cuando corresponda, la representación estatal ante instancias e instituciones nacionales e internacionales del sector cooperativo y de la economía social.

D)Comunicar e informar sobre los temas cooperativos vinculados a su gestión.

E)Establecer relaciones de cooperación recíproca y convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, así como con organismos internacionales o regionales.

F)Requerir información periódica y sistemática a las cooperativas y entidades de la economía social.

Sección II

Naturaleza y fiscalización

Artículo 189. (Personería jurídica y exoneraciones tributarias).- El Instituto Nacional del Cooperativismo, de acuerdo a su naturaleza jurídica de entidad pública no estatal, está dotado de personería jurídica.

Estará exonerado de todo tipo de tributos, con excepción de los aportes al Fondo Nacional de Salud y los aportes jubilatorios patronales y en lo no previsto especialmente en la presente ley, su régimen de funcionamiento será el de la actividad privada, especialmente en cuanto al régimen de contabilidad, estatuto laboral y contratos que celebre.

Artículo 190. (Bienes inembargables).- Los bienes del Instituto Nacional del Cooperativismo son inembargables y sus créditos, cualquiera fuera su origen, gozan del privilegio establecido en el numeral 6º del artículo 1732 del Código de Comercio.

Artículo 191. (Control sobre el Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOOP)).- El INACOOOP estará sometido al control de la Auditoría Interna de la Nación y del Tribunal de Cuentas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 199 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, en la redacción dada por el artículo 146 de la Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006.

Artículo 192. (Recursos contra las resoluciones del INACOOOP).- Contra las resoluciones del Directorio procederá el recurso de reposición, que deberá interponerse dentro de los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación del acto al interesado.

El Directorio dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver el asunto y se configurará denegatoria ficta por la sola circunstancia de no dictarse resolución dentro de dicho plazo.

Denegado el recurso de reposición el recurrente podrá interponer, únicamente por razones de juridicidad, demanda de anulación del acto impugnado ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de turno a la fecha en que dicho acto fue dictado. La interposición de esta demanda deberá hacerse dentro del término de veinte días de notificada la denegatoria expresa o, en su defecto, del momento en que se configure la denegatoria ficta. La demanda de anulación sólo podrá ser interpuesta por el titular de un derecho

subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto impugnado. La sentencia del Tribunal no admitirá recurso alguno.

Cuando la resolución emanare de la Dirección Ejecutiva, conjunta o subsidiariamente con el recurso de reposición, podrá interponerse el recurso jerárquico para ante el Directorio. Este recurso de reposición deberá interponerse y resolverse en los plazos previstos en el inciso segundo, el que también regirá en lo pertinente para la resolución del recurso jerárquico y para el posterior contralor jurisdiccional.

Sección III

Organización y funcionamiento

Artículo 193. (Estructura e integración).- Los órganos del Instituto Nacional del Cooperativismo serán el Directorio, la Dirección Ejecutiva y el Consejo Consultivo del Cooperativismo.

Artículo 194. (Dirección y administración).- El Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) será dirigido y administrado por un Directorio de cinco miembros, integrado por tres delegados del Poder Ejecutivo, uno de los cuales actuará en calidad de Presidente y otro en calidad de Vicepresidente, y dos delegados del sector cooperativo. Los delegados representantes del sector cooperativo serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Confederación Uruguay de Entidades Cooperativas (CUDECOOP), de una nómina de seis personas.

El Poder Ejecutivo procederá a designar de oficio los representantes del sector cooperativo cuando no se hubiera formalizado la proposición de los delegados dentro del plazo de treinta días desde su requerimiento.

La compensación por las actividades de los Directores será determinada de acuerdo a la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo.

La duración del mandato de los miembros del Directorio será de dos años, pudiendo ser reelectos por dos períodos más. Los delegados del Poder Ejecutivo podrán ser sustituidos de oficio y los delegados del sector cooperativo a iniciativa de la entidad proponente y, en ambos casos, con expresión de la causa que motiva la medida.

Cada miembro del INACOOP tendrá su correspondiente alterno que será designado por el Poder Ejecutivo. La reglamentación determinará el régimen de suplencias a aplicarse.

Los miembros salientes permanecerán en sus funciones hasta que asuman los nuevos miembros designados.

Artículo 195. (Atribuciones del Directorio).- Compete al Directorio:

A) Actuar como órgano de dirección del Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP), ejerciendo las competencias que se atribuyen al mismo por la presente ley, salvo las excepciones que se determinan expresamente.

B) Vigilar el cumplimiento de la presente ley y las normas reglamentarias que rijan la materia, pudiendo proponer al Poder Ejecutivo las medidas u observaciones que estime del caso.

C) Reglamentar los servicios, competencias y funciones respecto del personal y de los recursos materiales del INACOOP.

D) Mantener relaciones con autoridades públicas nacionales y extranjeras, entidades privadas y particulares, pudiendo a tal efecto otorgar mandatos generales y especiales.

E) Aprobar su presupuesto y elevarlo al Poder Ejecutivo para su conocimiento, conjuntamente con el plan de actividades.

F) Aprobar los planes, programas y los proyectos especiales.

G) Elevar la memoria y el balance anual del Instituto.

H)Adquirir, gravar y enajenar toda clase de bienes.

I)Delegar las atribuciones que estime pertinentes mediante resolución fundada y por mayoría de sus miembros.

J)Aprobar el reglamento de su propio funcionamiento.

K)En general, pronunciarse con respecto a los temas y puntos que someta a su consideración el Poder Ejecutivo y todo otro órgano de gobierno, así como realizar todos los actos civiles y comerciales, dictar los actos de administración interna y realizar las operaciones materiales inherentes a sus poderes generales de administración, con arreglo a los cometidos y especialización del Instituto.

L)Promover la creación de mesas departamentales de cooperativismo a nivel nacional.

En los casos previstos en los literales E), F) y H), en este último caso cuando se trate de bienes inmuebles, se deberán adoptar las resoluciones por mayoría especial de por lo menos cuatro miembros.

Artículo 196. (Atribuciones del Presidente).- Compete al Presidente:

A)Presidir y convocar al Directorio y ejercer la representación del INACOOOP tanto en el interior como en el exterior de la República.

B)Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes en la materia de competencia del Instituto.

Artículo 197. (Ausencia del Presidente).- En caso de ausencia o impedimento del Presidente del INACOOOP, sus funciones serán ejercidas interinamente por el Vicepresidente.

Artículo 198. (Director Ejecutivo).- Habrá un Director Ejecutivo cuya designación deberá recaer sobre aquella persona que demuestre tener una sólida formación en las materias propias del Instituto, según proceso de selección que a tales efectos dicte el Directorio. La designación requiere una mayoría especial de cuatro votos del Directorio.

El Director Ejecutivo asistirá a las sesiones del Directorio con voz y sin voto.

Artículo 199. (Atribuciones del Director Ejecutivo).- El Director Ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones:

A)Ejecutar los planes, programas y resoluciones aprobados por el Directorio.

B)Realizar todas las tareas inherentes a la administración del personal y a la organización interna del Instituto.

C)Promover el establecimiento de relaciones con entidades nacionales e internacionales, a fin de facilitar el cumplimiento de los cometidos del Instituto.

D)Promover el fortalecimiento de la cooperación técnica internacional con especial énfasis en la coordinación con institutos de otros países.

E)Toda otra que el Directorio le encomiende o delegue.

Artículo 200. (Consejo Consultivo del Cooperativismo).- El Consejo Consultivo del Cooperativismo estará integrado por representantes, de carácter honorario, de cada una de las clases de cooperativas previstas en la presente ley. Asimismo, lo integrarán dos representantes de la Universidad de la República y dos de la Administración Nacional de Educación Pública.

La reglamentación de la presente ley determinará cuántos representantes por cada modalidad integrarán el Consejo Consultivo, como así también podrá ampliar su integración con representantes de otras modalidades y organizaciones representativas del sector cooperativo.

El Consejo podrá ser convocado tanto a solicitud del Directorio como a solicitud de cinco de sus miembros.

Artículo 201. (Atribuciones del Consejo Consultivo del Cooperativismo).- El Consejo Consultivo del Cooperativismo será un órgano de consulta del Instituto y actuará:

- A)Asesorando en la elaboración del Reglamento General del Instituto.
- B)Asesorando en la elaboración de los planes y programas.
- C)Asesorando en todo aquello que el Directorio le solicite.
- D)Opinando en toda otra cuestión relacionada con el cooperativismo y la economía social cuando lo estime conveniente.
- E)En la reglamentación de su propio funcionamiento.

Sección IV

Régimen financiero

Artículo 202. (Fuentes de financiamiento).- El INACOOOP dispondrá para su funcionamiento y desarrollo de sus diversos programas y planes, de los siguientes recursos:

- A)Los ingresos provenientes de la prestación coactiva establecida en el artículo 204 de la presente ley.
- B)Una partida transitoria con cargo a Rentas Generales de 10.000.000 UI (diez millones de unidades indexadas) anuales para los ejercicios 2009 y 2010.
- C)En los siguientes años las partidas presupuestales que se le deberán asignar en las leyes correspondientes.
- D)Los provenientes de la asistencia de la cooperación internacional.
- E)Las donaciones, legados u otros recursos análogos que se reciban.
- F)La totalidad de ingresos que obtenga por la prestación de sus servicios y cualquier otro financiamiento que reciba para cumplir los programas de su competencia.
- G)El remanente de la liquidación de entidades cooperativas de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 97 de la presente ley.

Artículo 203. (Balance auditado).- El Instituto publicará anualmente un balance auditado externamente y con el dictamen del Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de la presentación periódica de otros estados que reflejen claramente su actuación financiera.

Artículo 204. (Prestación coactiva para la promoción, desarrollo y educación cooperativa).- Créase una prestación coactiva anual destinada a la promoción, desarrollo y educación cooperativa, la que se regirá por lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 205. (Estructura de la prestación coactiva para la promoción, desarrollo y educación cooperativa).- Establécese la siguiente estructura para la prestación creada por el artículo 204:

- 1)Hecho generador: Constituye hecho generador el desarrollo de las actividades propias de las cooperativas en el ámbito de su naturaleza específica. El hecho generador se considerará configurado al cierre del ejercicio económico de la cooperativa.
- 2)Período de liquidación: El período de liquidación será anual, salvo en el caso de que la cooperativa inicie actividades o cambie su fecha de cierre de ejercicio económico. En el primer período de vigencia de la prestación, la liquidación se realizará considerando el período comprendido entre el primer día del mes siguiente al de la promulgación de la presente ley y el cierre del ejercicio económico.
- 3)Sujeto activo: será sujeto activo el INACOOOP quien podrá celebrar convenios de recaudación con organismos públicos y privados.
- 4)Sujetos pasivos: serán contribuyentes de la prestación las cooperativas de primer, segundo o ulterior grado que operen en el país. Facúltase al Poder Ejecutivo a designar

agentes de retención y percepción, responsables por obligaciones tributarias de terceros y responsables sustitutos en relación a la prestación.

5)Monto imponible de las cooperativas en general: Para las cooperativas en general, excluidas las de vivienda, el monto imponible estará constituido por el total de los ingresos del ejercicio, originados en las enajenaciones de bienes y prestaciones de servicios. A tal fin, se excluirá del cálculo de la base imponible el Impuesto al Valor Agregado y los ingresos provenientes de enajenaciones de bienes y prestaciones de servicios a otras cooperativas.

6)Monto imponible de las cooperativas de vivienda: El monto imponible de las cooperativas de viviendas se establecerá en función del número de socios cooperativistas y de su calificación por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de acuerdo al siguiente detalle:

Categoría del MVOTMA	Monto imponible: unidades reajustables por socio y por año
Ingresos entre 20,9 y 28,2 UR	100 UR
Ingresos entre 28,3 y 35,4 UR	167 UR
Ingresos entre 35,5 y 42,9 UR	267 UR
Ingresos entre 43 y 50,3 UR	367 UR
Ingresos entre 50,4 y 57,6 UR	500 UR
Ingresos superiores a 57,7 UR	667 UR

7)Tasa: La alícuota de la prestación será en todos los casos del 0,15% (cero con quince por ciento).

8)Monto máximo: El monto máximo de la prestación correspondiente a cada cooperativa no podrá exceder las 200.000 UI (doscientos mil unidades indexadas), a la cotización del cierre del ejercicio.

9)Exoneraciones: Estarán exoneradas de la prestación:

A)Las cooperativas sociales.

B)Las cooperativas cuyos ingresos comprendidos en el numeral 5) del presente artículo no superen en el ejercicio las 500.000 UI (quinientas mil unidades indexadas), a la cotización de cierre del mismo.

C)Las cooperativas de trabajo en las que el monto imponible para la liquidación de las contribuciones especiales de seguridad social correspondientes a los socios superen en el ejercicio el 70% (setenta por ciento) de los ingresos a que refiere el numeral 5) y cumplan con la condición de que los salarios y demás prestaciones que la cooperativa pague no sean superiores a los establecidos por los laudos de la rama respectiva.

D)Las cooperativas de trabajo, siempre que hayan surgido como consecuencia de un proceso de liquidación, moratoria, cesación de pagos o situación similar de la empresa titular anterior de la unidad productiva. Esta exoneración regirá por un plazo de cinco años a partir de que la cooperativa comience a producir.

E)Las cooperativas de segundo o ulterior grado que tengan fines y actividad gremial o de representación.

F)Las cooperativas de vivienda antes de ser habitadas por los socios.

10) Liquidación y pago: La prestación se liquidará anualmente, en las condiciones que establezca el sujeto activo, el que queda facultado para establecer pagos a cuenta de la misma.

11) Deducción: Del monto de la prestación a pagar el contribuyente podrá deducir los costos correspondientes a afiliaciones a entidades cooperativas de grado superior de carácter gremial que posean personería jurídica, y los servicios que estas entidades le presten, hasta un máximo del 15% (quince por ciento) del total de la prestación.

Artículo 206. (Certificado de cumplimiento de la prestación coactiva).- Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer un régimen de certificado de cumplimiento de la prestación

coactiva creada por el artículo 204 de la presente ley. Dicho certificado será emitido por el INACOOOP y deberá ser presentado ante la Auditoría Interna de la Nación.

La reglamentación podrá establecer que la presentación de dicho certificado ante la Auditoría Interna de la Nación integre el conjunto de obligaciones a que refiere el artículo 213 de la presente ley.

Artículo 207.- La prestación coactiva creada por el artículo 204 de la presente ley queda excluida de las exoneraciones tributarias genéricas o específicas de que gozan las cooperativas y será de aplicación en todos los casos.

Artículo 208. (Prestación coactiva).- En todo lo no previsto en la presente ley para la prestación coactiva creada por el artículo 204, se aplicará lo establecido en el Código Tributario en lo pertinente.

Artículo 209. (Fondo Rotatorio Especial).- Créase el Fondo Rotatorio Especial (FRECOOP) cuyo destino es el cofinanciamiento de proyectos de inversión para la viabilidad y desarrollo de las empresas cooperativas cualquiera sea su clase o grado.

Este Fondo se integrará con los siguientes recursos:

A) Las partidas presupuestales que se le asignen y los excedentes de la ejecución presupuestal de las mismas.

B) Los aportes que con tal fin se obtengan de cualquier fuente.

C) Los importes pagados por las cooperativas por concepto de reintegro del capital y sus intereses de los préstamos otorgados por dicho Fondo.

El INACOOOP será quien administrará este Fondo y establecerá los criterios y prioridades de acuerdo a los cuales se asignarán los recursos de financiamiento a los diferentes proyectos y actividades.

Artículo 210. (Fondo de Fomento del Cooperativismo).- Créase el Fondo de Fomento del Cooperativismo (FOMCOOP), cuya finalidad es el financiamiento de proyectos de actividades de formación, capacitación, promoción y difusión de los principios y valores del cooperativismo y de gestión de entidades cooperativas.

Este Fondo se integrará con los siguientes recursos:

A) Las partidas presupuestales que se le asignen y los excedentes de la ejecución presupuestal de las mismas.

B) Los aportes que con tal fin se obtengan de cualquier fuente.

C) Los remanentes de las liquidaciones de las cooperativas, luego de cumplir con las disposiciones legales y estatutarias.

El INACOOOP será quien administrará el FOMCOOP y establecerá, en función del programa anual de las actividades que financie este Fondo, los criterios y prioridades de acuerdo a los cuales se asignarán los recursos de financiamiento a los diferentes proyectos y actividades.

CAPÍTULO II

CONTROL ESTATAL DE LAS COOPERATIVAS

Artículo 211. (Autoridad de control).- La fiscalización sobre las cooperativas estará a cargo de la Auditoría Interna de la Nación, excepto respecto de las cooperativas sociales que serán controladas por el Ministerio de Desarrollo Social.

Sin perjuicio de las atribuciones y cometidos asignados al Ministerio de Desarrollo Social en relación a las cooperativas sociales, la Auditoría Interna de la Nación podrá establecer

criterios técnicos de contralor y, cuando así lo solicite el mencionado Ministerio, ejercerá funciones de fiscalización en esas cooperativas.

Artículo 212. (Atribuciones de la Auditoría Interna de la Nación).- A los efectos del cumplimiento de los cometidos de fiscalización sobre las entidades cooperativas, la Auditoría Interna de la Nación tendrá las siguientes atribuciones:

- 1) Convocar a las cooperativas a inscribirse en el plazo y con los recaudos que ella determine.
- 2) Ejercer la fiscalización de las Asambleas que realicen las cooperativas.
- 3) Realizar las auditorías sobre los estados contables y el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias.
- 4) Visar los estados contables de las cooperativas con el alcance y procedimientos que la reglamentación determine.
- 5) Expedir el certificado de situación regular de cumplimiento de obligaciones para con la Auditoría Interna de la Nación.
- 6) Fijar los planes de cuentas y los formatos de presentación de los estados contables, notas y anexos.
- 7) Solicitar al Juez competente:
 - A) La suspensión de las resoluciones de los órganos sociales contrarias a la normativa vigente, al estatuto o al reglamento de la cooperativa.
 - B) La intervención judicial de su administración en los casos de violación de la normativa vigente o del estatuto social según determine la reglamentación.
 - C) Su disolución y liquidación cuando se compruebe fehacientemente la producción de una causal de disolución y la cooperativa no la haya promovido o cuando se comprueben actos ilícitos, incumplimientos u omisiones graves de lo dispuesto por la presente ley, por el estatuto o por el reglamento.
- 8) Publicar las resoluciones sobre el resultado de sus actuaciones en las cooperativas.
- 9) Remitir al Instituto Nacional del Cooperativismo, a la Dirección General Impositiva, al Área de Defensa del Consumidor de la Dirección General de Comercio, al Banco de Previsión Social y al Banco Central del Uruguay toda información relevante que implique una presunción de actos ilícitos o contrarios a lo dispuesto en la normativa vigente.
- 10) Aplicar sanciones administrativas de observación, apercibimiento con publicación, multa e inhabilitación del régimen de retenciones, a las cooperativas, en caso de violación de la normativa vigente, del estatuto o del reglamento de la cooperativa.

La reglamentación deberá tipificar las infracciones que darán mérito a la aplicación de las sanciones, así como la entidad y monto de estas últimas.

El monto de las multas deberá graduarse de acuerdo a la entidad y a la reiteración de la infracción y su máximo no podrá superar el importe equivalente a 10.000 UR (diez mil unidades reajustables).
- 11) Realizar fiscalizaciones de oficio o a solicitud de la Comisión Fiscal o del 10% (diez por ciento) de los socios de las cooperativas; en estos dos últimos casos, de disponerse la fiscalización, la misma se limitará al contenido de la solicitud.

Artículo 213. (Obligaciones de las cooperativas).- Son obligaciones de las cooperativas para con la Auditoría Interna de la Nación:

- 1) Inscribirse en el registro correspondiente.
- 2) Exhibir a su requerimiento, los libros sociales y contables y toda información y documentación respaldante que sea sustento de las registraciones en ellos realizada, así como toda otra documentación que le fuera requerida a los fines de la fiscalización.
- 3) Presentar, en los plazos, formas y con los contenidos que determine la reglamentación:

A) Las actas de los actos eleccionarios, de las asambleas y las modificaciones en la integración de los órganos sociales.

B) Las publicaciones de las convocatorias de actos sociales y de los estados contables visados.

C) Los estados contables y el proyecto de distribución o absorción del resultado de gestión.

4) Difundir en la Asamblea de socios los informes emitidos y exigidos por la Auditoría Interna de la Nación.

5) Presentar las resoluciones de los órganos sociales y los proyectos correspondientes, cuando se decida la fusión, absorción, escisión o disolución y liquidación dentro del plazo que establezca la reglamentación.

Artículo 214. (Certificado de cumplimiento regular de obligaciones para con la Auditoría Interna de la Nación).- La Auditoría Interna de la Nación expedirá el certificado de cumplimiento regular de obligaciones para con ella, a toda cooperativa inscrita en sus registros que lo solicite y que esté al día en el cumplimiento de las referidas obligaciones. Dicha constancia tendrá una vigencia de un año y deberá ser necesariamente acreditada ante toda empresa o institución pública o privada para que ésta proceda a la retención y posterior versión de las retenciones sobre retribuciones salariales y pasividades a la cooperativa. En caso de no ser acreditado el certificado de regularidad referido, la empresa o institución pública o privada estará impedida de efectuar las retenciones y posteriores versiones de las retenciones a la cooperativa.

La Auditoría Interna de la Nación no expedirá el certificado de regularidad referido cuando hubiera resuelto la no visación de los estados contables de la cooperativa de acuerdo al numeral 4) del artículo 212 de la presente ley, cuando a su criterio existieren violaciones a lo dispuesto en la normativa vigente, en el estatuto o en el reglamento por parte de la cooperativa, o cuando ésta no cumpla con sus obligaciones previstas en el artículo 213 de la presente ley.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS

Artículo 215. (Sección Registro Nacional de Cooperativas).- Créase dentro del Registro de Personas Jurídicas, creado por el artículo 294 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001, la Sección Registro Nacional de Cooperativas que tendrá los cometidos y funciones que le asigna la presente ley.

En la Sección Registro Nacional de Cooperativas se inscribirán los siguientes actos y contratos:

- 1) El acta de constitución y el estatuto de las cooperativas.
- 2) Los documentos de uso y goce previstos por el artículo 135 de la presente ley.
- 3) Todos los actos que alteren, modifiquen o extingan las inscripciones efectuadas.

Los documentos que se presenten a inscribir deberán acompañarse de un formulario con información actualizada de la cooperativa, cuya forma y contenido reglamentará el INACOOOP, el que oportunamente será remitido a éste por el Registro Nacional de Cooperativas. La cooperativa inscribiente justificará estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la Auditoría Interna de la Nación exhibiendo el certificado de situación regular establecido en el artículo 214 de la presente ley.

Artículo 216. (Control de asambleas y elecciones).- Las disposiciones referidas al control de las asambleas y elecciones regirán sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley N° 12.179, de 4 de enero de 1955, y su decreto reglamentario.

Artículo 217. (Vigencia de las normas de retenciones).- Mantienen plena vigencia todas las normas legales que consagran y regulan a favor de las cooperativas, la facultad de utilizar el procedimiento de las retenciones de los haberes y pasividades de sus socios, para el cobro de las partes sociales, cuotas de ahorro o amortización de créditos, cuotas de admisión, sostenimiento y solidaridad o cualquier otro concepto establecido en dichas normas, ya sea en empresas u organismos privados o públicos.

Artículo 218. (Régimen tributario).- Sin perjuicio de las disposiciones específicas establecidas en los capítulos de la presente ley que regulan cada tipo de cooperativa, se mantendrá el régimen tributario vigente aplicable a las cooperativas, incluyendo las correspondientes exoneraciones.

Aquellas clases o tipos de cooperativas contenidos en la presente ley, que no tuvieran una regulación tributaria legal expresa con anterioridad a la vigencia de la misma, gozarán de los beneficios establecidos para las cooperativas de consumo en el artículo 8° de la Ley N° 17.794, de 22 de julio de 2004, con las excepciones establecidas en las disposiciones legales vigentes.

Artículo 219. (Transformación de federaciones).- Las entidades de segundo o tercer grado existentes a la fecha de promulgación de la presente ley, representativas de un sector de las cooperativas o de la totalidad de ellas, que no posean la forma jurídica de cooperativa, tendrán la facultad de transformarse en cooperativa de segundo o ulterior grado, según corresponda.

Artículo 220. (Enseñanza del cooperativismo).- Los órganos competentes de la educación, en coordinación con el INACOOP, deberán elaborar los programas curriculares de los niveles primario, secundario y terciario, que incorporen progresivamente la enseñanza y la práctica del cooperativismo, así como la formación de los docentes respectivos.

Artículo 221. (Adaptación de las cooperativas a las previsiones de la ley).- Las cooperativas constituidas con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley, dispondrán de un plazo de dos años a partir de dicha fecha para adaptar sus estatutos a lo establecido en esta ley.

La reforma del estatuto deberá adoptarse en Asamblea General Extraordinaria, siendo suficiente el voto a favor de más de la mitad de los socios presentes.

Transcurridos dos años desde la entrada en vigencia de la presente ley no se inscribirá en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Cooperativas, documento alguno de cooperativas sometidas a esta ley hasta tanto no se haya inscrito, de ser necesario, la adaptación de sus estatutos sociales; y serán pasibles de las sanciones previstas en la presente ley.

Artículo 222. (Adaptación de las cooperativas de ahorro y crédito).- Las disposiciones del Capítulo VI del Título II referido a las cooperativas de ahorro y crédito, en lo pertinente, serán aplicables de pleno derecho a las cooperativas de ahorro y crédito constituidas o en trámite de constitución a la fecha de vigencia de la presente ley.

Artículo 223.- La Cooperativa Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE) se continuará rigiendo por sus leyes especiales, sin perjuicio de la aplicación de esta ley en lo no dispuesto por ellas y en tanto sea pertinente. Esta entidad estará gravada por la prestación creada por el artículo 204 de la presente ley.

Artículo 224. (Excepciones).- Deróganse las siguientes leyes y decretos-leyes, salvo todo aquello que refiera a la materia tributaria de las cooperativas: N° 10.761, de 15 de agosto de 1946; N° 12.771, de 6 de setiembre de 1960, en lo relativo a las cooperativas; artículos 130 a 176 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968; inciso tercero del artículo 2° de la Ley N° 13.988, de 19 de julio de 1971, en la redacción dada por el artículo 1° del Decreto-Ley N° 14.919, de 15 de agosto de 1979; N° 14.827, de 20 de setiembre de 1978; N° 15.645, de 17 de octubre de 1984; artículo 515 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989; N° 16.156, de 29 de octubre de 1990; artículo 506 de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992; artículos 190 a 192, inclusive, de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996; artículo 47 de la Ley N° 17.292, de 25 de enero de 2001; artículos 407, 633 y 634, inclusive, de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001; N° 17.794, de 22 de julio de 2004; artículos 1° a 7°, inclusive, de la Ley N° 17.978, de 26 de junio de 2006; y todas las disposiciones que se opongan directa o indirectamente a la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 23 de octubre de 2008.

JOSÉ MUJICA,

Presidente.

Hugo Rodríguez Filippini,

Secretario.

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Montevideo, 24 de octubre de 2008.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se regula en forma general el funcionamiento del sistema cooperativo.

TABARÉ VÁZQUEZ.

DAISY TOURNÉ.

GONZALO FERNÁNDEZ.

ÁLVARO GARCÍA.

JOSÉ BAYARDI.

MARÍA SIMON.

VÍCTOR ROSSI.

DANIEL MARTÍNEZ.

EDUARDO BONOMI.

MARÍA JULIA MUÑOZ.

ERNESTO AGAZZI.
HÉCTOR LESCOANO.
CARLOS COLACCE.
MARINA ARISMENDI.

4.37. VENEZUELA

• DECRETO CON FUERZA DE LEY ESPECIAL DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

Objeto de la Ley

Artículo 1º. La presente Ley tiene como objeto establecer las normas generales para la organización y funcionamiento de las cooperativas.

Esta Ley tiene como finalidad disponer los mecanismos de relación, participación e integración de dichos entes en los procesos comunitarios, con los Sectores Público y Privado y con la Economía Social y Participativa, constituida por las empresas de carácter asociativo que se gestionan en forma democrática. Así mismo, establecer las disposiciones que regulen la acción del Estado en materia de control, promoción y protección de las cooperativas.

Definición de Cooperativa

Artículo 2º. Las cooperativas son asociaciones abiertas y flexibles, de hecho y derecho cooperativo, de la Economía Social y Participativa, autónomas, de personas que se unen mediante un proceso y acuerdo voluntario, para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, para generar bienestar integral, colectivo y personal, por medio de procesos y empresas de propiedad colectiva, gestionadas y controladas democráticamente.

Valores cooperativos

Artículo 3º. Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, esfuerzo propio, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Sus miembros promueven los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y compromisos por los demás.

Principios Cooperativos

Artículo 4º. Los principios cooperativos son lineamientos por medio de los cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores son: 1º) asociación abierta y voluntaria; 2º) gestión democrática de los asociados; 3º) participación económica igualitaria de los asociados; 4º) autonomía e independencia; 5º) educación, entrenamiento e información; 6º) cooperación entre cooperativas; 7º) compromiso con la comunidad. Las cooperativas se guían también por los principios y criterios de las experiencias y los procesos comunitarios solidarios que son parte de nuestra cultura y recogen la tradición solidaria ancestral que ha conformado nuestro pueblo.

Autonomía

Artículo 5°. El Estado garantizará el libre desenvolvimiento y la autonomía de las cooperativas, así como el derecho de los trabajadores y trabajadoras, y de la comunidad de cooperativas para el desarrollo de cualquier tipo de actividad económica y social de carácter lícito, en condiciones de igualdad con las demás empresas, sean públicas o privadas.

Acuerdo libre e igualitario

Artículo 6°. Las cooperativas se originan en un acuerdo libre e igualitario de personas que deciden constituir y mantener una empresa asociativa de Derecho Cooperativo, cuyas actividades deben cumplirse con fines de interés social y beneficio colectivo, sin privilegios para ninguno de sus miembros.

Acto Cooperativo

Artículo 7°. Son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y sus asociados o por las cooperativas entre sí o con otros entes en cumplimiento de su objetivo social y quedan sometidos al Derecho Cooperativo, y en general al ordenamiento jurídico vigente.

Régimen

Artículo 8°. Las cooperativas y sus formas de coordinación, asociación e integración se regirán por la Constitución, esta Ley y su reglamento, por sus estatutos, reglamentos y disposiciones internas y en general, por el Derecho Cooperativo. Supletoriamente se aplicará el derecho común, en cuanto sea compatible con su naturaleza y principios y en última instancia, los principios generales del derecho.

CAPITULO II

DE LA CONSTITUCION

Acto de constitución

Artículo 9°. El acuerdo para constituir una cooperativa se materializará en un acto formal, realizado en una reunión de los asociados fundadores, en la que se aprobará el estatuto, se suscribirán aportaciones y se elegirán los integrantes de las instancias organizativas previstas en dicho estatuto.

Formalidad y trámite

Artículo 10. La reunión constitutiva de los asociados fundadores, decidirá quién o quienes certificarán las formalidades de la misma y quienes realizarán los trámites para la obtención de la personería jurídica. Estos presentarán en la oficina subalterna de registro de la circunscripción judicial del domicilio de la cooperativa, copia del acta de la reunión suscrita por los fundadores, con la transcripción del estatuto, e indicación de los aportes suscritos y pagados y el listado de las personas debidamente identificadas que la constituyen.

Constitución Legal

Artículo 11. Si el registro no tuviere observaciones de carácter legal, o una vez satisfechas éstas, aceptará el otorgamiento del documento correspondiente por parte de los representantes y lo registrará; la cooperativa se considerará legalmente constituida y con personalidad jurídica.

Una vez constituida, la cooperativa deberá enviar a la Superintendencia Nacional de Cooperativas dentro de los quince (15) días siguientes al registro, una copia simple del acta constitutiva y del estatuto, a los efectos del control correspondiente.

Exención de Pago

Artículo 12. La inscripción en el Registro Público del acta constitutiva y estatuto de las cooperativas, así como el registro y expedición de copias de cualesquiera otro documento otorgado por las mismas, estará exento del pago de derechos de registro y de cualquier otra tasa o arancel que se establezca por la prestación de este servicio.

Contenido del Estatuto

Artículo 13. El estatuto, como mínimo, contendrá:

1. Denominación, duración y domicilio.
2. Determinación del objeto social.
3. Régimen de responsabilidad: Limitado o suplementado y sus alcances.
4. Condiciones de ingreso de los asociados. Sus derechos y obligaciones. Pérdida del carácter de asociado. Suspensiones y exclusiones.
5. Formas de organización de la cooperativa y normas para su funcionamiento, coordinación y control. Atribuciones reservadas a la reunión general de asociados o asamblea. Reglamentos internos y competencia para dictarlos.
6. Las normas para establecer la representación legal, judicial y extrajudicial.
7. Modalidades de toma de decisiones.
8. Formas de organización y normas con relación al trabajo en la cooperativa.
9. Formas y maneras de desarrollo de la actividad educativa. Funcionamiento de la o las instancias de coordinación educativa.
10. Régimen económico: organización de la actividad económica, mecanismos de capitalización y modalidades de instrumentos de aportación. Aportaciones mínimas por asociado, distribución de los excedentes y normas para la formación de reservas y fondos permanentes. Ejercicio económico.
11. Normas sobre la integración cooperativa.
12. Procedimientos para la reforma del estatuto.
13. Procedimiento para la transformación, fusión, escisión, segregación, disolución y liquidación.
14. Normas sobre el régimen disciplinario.

Denominación

Artículo 14. La denominación social debe incluir el vocablo cooperativa con el agregado de la palabra que corresponda a su responsabilidad.

Queda prohibido el uso de la denominación cooperativa y abreviaturas de esa palabra, a entidades no constituidas conforme a la presente Ley.

Las cooperativas que se constituyan no podrán utilizar nombres para su identificación con los que se hayan constituido otras cooperativas, con similares o que puedan crear confusión con otras cooperativas creadas.

Cooperativas en Formación

Artículo 15. Los actos celebrados y los documentos suscritos a nombre de la cooperativa antes de su constitución legal, salvo los necesarios para el trámite ante el registro, hacen solidariamente responsables a quienes los celebraron o suscribieron por parte de la cooperativa en formación.

Número mínimo de asociados

Artículo 16. Las cooperativas podrán conformarse y funcionar con un mínimo de cinco asociados.

Reforma de estatutos

Artículo 17. Las reformas estatutarias deben ser aprobadas por lo menos con el setenta y cinco por ciento (75%) de los asociados presentes en la reunión general de asociados o asamblea, realizada de conformidad con el quórum que establezca el estatuto. El acta en la que conste dicha modificación, la certificación de los asociados que la aprobaron y el estatuto, se protocolizarán dentro del término de quince (15) días hábiles. Entrarán en vigencia una vez otorgado y registrado el documento de modificación. Las cooperativas deberán enviar a la Superintendencia Nacional de Cooperativas, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, copia simple del otorgamiento registrado de la modificación estatutaria.

CAPITULO III

DE LOS ASOCIADOS

Condiciones para ser asociado

Artículo 18. Pueden ser asociados:

1. Las personas naturales, que sean trabajadores o trabajadoras, productores primarios de bienes o servicios, o consumidores o usuarios primarios.
2. Las personas jurídicas de carácter civil, sin fines de lucro, siempre que reúnan los requisitos establecidos en el estatuto.
3. Cuando las cooperativas utilicen trabajadores o trabajadoras asalariados de acuerdo con el artículo 36 de la presente Ley, estos pueden gozar de los beneficios de la cooperativa de conformidad con sus estatutos.
4. Los adolescentes con autorización de sus representantes, en los términos que establezca el estatuto y de conformidad con las Leyes que regulan la materia.

No podrán establecerse requisitos económicos o de otra naturaleza, que dificulten la asociación de los trabajadores a las cooperativas, que por excepción, no sean asociados.

Continuidad

Artículo 19. Los asociados trabajadores que no puedan continuar trabajando en la cooperativa, en forma temporal o permanente, por edad, incapacidad, fuerza mayor o por cualquier otra circunstancia grave prevista en sus normas internas, tendrán derecho a continuar siendo asociados, en las condiciones que estipule el estatuto o sus reglamentos. Estas condiciones se establecerán propendiendo a que dichos asociados puedan conservar el nivel de vida que lograrían por su asociación y participación en la cooperativa.

Ingreso

Artículo 20. El carácter de asociado se adquiere mediante participación y manifestación de adhesión en la reunión o asamblea constitutiva o ante la instancia que prevean el estatuto para tal fin.

De la negativa a ser incorporado como asociado por la instancia que prevean el estatuto, se podrá recurrir ante la asamblea, la que obligatoriamente deberá considerar el tema en su próxima sesión. La cooperativa deberá llevar un registro de todos sus asociados.

Deberes y Derechos

Artículo 21. Son deberes y derechos de los asociados, sin perjuicio de los demás que establezcan esta Ley y el estatuto:

1. Concurrir y participar en todas las decisiones que se tomen en las reuniones generales de asociados o asambleas y en las demás instancias, en el trabajo y otras actividades, sobre bases de igualdad.
2. Cumplir y hacer cumplir las obligaciones sociales y económicas propias de la cooperativa, las resoluciones de la reunión general de asociados o asamblea y las instancias de coordinación y control establecidas en el estatuto.
3. Ser elegidos y desempeñar cargos en todas las instancias y asumir las responsabilidades que se les encomienden, dentro de los objetivos de la cooperativa.
4. Utilizar los servicios en las condiciones establecidas.
5. Solicitar y obtener información de las instancias de coordinación y control, sobre la marcha de la cooperativa.
6. Participar en las decisiones sobre el destino de los excedentes.
7. Velar y exigir el cumplimiento de los derechos humanos en general y en especial los derivados de la Seguridad Social, y el establecimiento de condiciones humanas para el desarrollo del trabajo.

Pérdida del carácter de asociado

Artículo 22. El carácter de asociado se extingue por:

1. Fin de la existencia de la persona física o jurídica.
2. Renuncia.
3. Pérdida de las condiciones para ser asociado, establecidas en esta Ley, su reglamento y el estatuto correspondiente, salvo los previstos en el artículo 19.
4. Exclusión acordada en la reunión general de los asociados o asamblea, por las causas establecidas en el estatuto.
5. Extinción de la cooperativa.

Reintegros

Artículo 23. En caso de pérdida de la condición de asociado por cualquiera de las causas señaladas en el artículo anterior, los asociados sólo tienen derecho a que se les reintegren los préstamos que le hayan hecho a la cooperativa, respetando los plazos establecidos, el valor de las aportaciones integradas y los excedentes que le correspondan, deducidas las pérdidas que proporcionalmente les correspondiere soportar y sin perjuicio de la revalorización que pudieren tener. El estatuto preverá las condiciones para los reintegros, los que en ningún caso se podrán retener por un período superior a seis (6) meses, a menos que las condiciones económicas de la cooperativa lo impidan.

CAPITULO IV

ORGANIZACION Y COORDINACION

Flexibilidad organizativa

Artículo 24. Las formas y estructuras organizativas y de coordinación de las cooperativas se establecerán en el estatuto y deberán ser flexibles y abiertas a los procesos de cambio y adaptadas a los valores culturales y a las necesidades de los asociados, propiciando la participación plena y permanente de los mismos, de manera que las responsabilidades sean compartidas y las acciones se ejecuten colectivamente.

Las cooperativas decidirán su forma organizativa, atendiendo a su propósito económico, social y educativo, propiciando la participación, evaluación y control permanente y el mayor acceso a la información.

Las instancias

Artículo 25. Las cooperativas deben contemplar en sus estatutos para su coordinación, asambleas o reuniones generales de los asociados. Además podrán contar con instancias, integradas por asociados, para la coordinación de los procesos administrativos, de evaluación, control, educación y otras que se consideren necesarias.

Atribuciones

Artículo 26. Son atribuciones de la reunión general de asociados o asamblea, las siguientes:

1. Aprobar y modificar el estatuto y los reglamentos que le correspondan.
2. Fijar las políticas generales y aprobar los planes y presupuestos.
3. Decidir sobre cuáles integrantes de las instancias deberán elegirse y removerse por la reunión general de asociados o asamblea, de conformidad con el estatuto.
4. Analizar y tomar las decisiones que correspondan con relación a los balances económicos y sociales.
5. Decidir sobre los excedentes.
6. Decidir sobre la afiliación o desafiación a organismos de Integración.
7. Decidir sobre las políticas para la asociación con personas jurídicas de carácter asociativo y sobre las políticas para la contratación con personas jurídicas públicas o privadas.
8. Resolver sobre fusión, incorporación, escisión, segregación, transformación o disolución.
9. Decidir sobre la exclusión de asociados, de conformidad con la Ley y el estatuto correspondiente.
10. Las demás que le establezca esta Ley, su reglamento o el estatuto de cooperativa.

Toma de decisiones

Artículo 27. Las decisiones se tomarán en forma democrática. Será potestad de cada organización optar por formas democráticas de consenso, votación o mixtas. El estatuto establecerá las modalidades.

Formas de organización

Artículo 28. Las modalidades de realización de las asambleas o reuniones generales de asociados, otras modalidades de reuniones, la organización de las diferentes instancias, las convocatorias, el quórum, la composición y duración de los integrantes de las instancias, se establecerán en el estatuto y los reglamentos internos.

En cualquier caso, un porcentaje de los asociados, que determinará el estatuto, podrá convocar la asamblea o reunión general de asociados, cuando no se haya realizado dicha convocatoria en las condiciones y plazos previstos en el estatuto o reglamentos; las elecciones se realizarán en forma nominal; la duración en los cargos de los integrantes de las instancias no podrá ser mayor a tres (3) años; el estatuto podrá establecer la reelección en cuyo caso será por un sólo periodo; en las asambleas o reuniones generales de asociados no se podrá representar a más de un asociado salvo en aquellas que se realicen por delegados.

Actas

Artículo 29. De las reuniones generales de asociados o asambleas, y de las diferentes instancias de coordinación, evaluación, control, educación y otras que establezcan los asociados, se levantarán actas debidamente firmadas, por las personas designadas para tal fin, en donde se deje constancia de los presentes en la reunión, de los puntos tratados y de las decisiones tomadas.

De estas actas se llevará adecuado archivo y registro.

CAPITULO V

EL TRABAJO COOPERATIVO

Especificidad del trabajo en las cooperativas

Artículo 30. El Estado reconoce el carácter específico del trabajo asociado en las cooperativas, que se da en ellas mediante actos cooperativos.

Responsabilidad de los asociados

Artículo 31. El trabajo en las cooperativas es responsabilidad y deber de todos los asociados y deberá desarrollarse en forma de colaboración sin compensación económica, a tiempo parcial o completo, con derecho a participar en los excedentes que se produzcan por todos en la cooperativa. El trabajo de los asociados debe ser reconocido y valorado en cada una de sus modalidades.

Características

Artículo 32. El trabajo en las cooperativas es asociado, cualquiera que sea su objeto, y bajo cualquier modalidad, se desarrollará en equipo, con igualdad, disciplina colectiva y autogestión, de tal modo que se estimule la creatividad y el emprendimiento, la participación permanente, la creación de bienestar integral, la solidaridad y el sentido de identidad y pertenencia.

Participación de los asociados trabajadores

Artículo 33. El trabajo debe organizarse de manera tal que se garantice la más amplia participación de los asociados que lo realicen directamente, en la definición de las políticas, planes y modalidades del mismo trabajo. Igualmente se debe garantizar esa participación en las instancias de coordinación de los procesos administrativos, de evaluación y educación. Las formas de coordinación y compensación del trabajo se establecerán bajo principios de equidad y amplia participación.

Regulaciones

Artículo 34. El régimen de trabajo, sus normas disciplinarias, las formas de organización, de previsión, protección social, regímenes especiales, de anticipos societarios y de compensaciones, serán establecidos en el estatuto, reglamentos, normas y procesos de evaluación, de conformidad con las disposiciones de la Constitución, esta Ley, y de otras leyes que se refieran a la relación específica del trabajo asociado, en razón de que se originan en el acuerdo cooperativo.

Los asociados que aportan su trabajo en las cooperativas no tienen vínculo de dependencia con la cooperativa y los anticipos societarios no tienen condición de salario. En consecuencia no estarán sujetos a la legislación laboral aplicable a los trabajadores dependientes y las diferencias que surjan, se someterán a los procedimientos previstos en esta Ley y en otras leyes que consideren la relación de trabajo asociado.

Anticipos Societarios

Artículo 35. Los asociados que aportan su trabajo tienen derecho a percibir, periódicamente, según su participación en la cooperativa, según lo que prevean los estatutos o reglamentos internos, anticipos societarios a cuenta de los excedentes de la cooperativa.

Trabajo de no asociados

Artículo 36. Las cooperativas podrán, excepcionalmente, contratar los servicios de no asociados, para trabajos temporales que no puedan ser realizados por los asociados. Esta relación se regirá por las disposiciones de la legislación laboral aplicable a los trabajadores dependientes y terminará cuando estos trabajadores se asocien a la cooperativa.

Las personas naturales que trabajen hasta por seis meses para la cooperativa en labores propias de la actividad habitual de ésta, tendrán derecho a exigir su ingreso como asociados, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el estatuto, y cesaran en su relación laboral.

Contratación con otras empresas

Artículo 37. Las cooperativas de cualquier naturaleza, cuando no estén en la posibilidad de realizar por sí mismas el trabajo que les permita alcanzar su objeto, contratarán los servicios de cooperativas o empresas asociativas y de no ser esto posible, podrán contratar empresas de otro carácter jurídico, siempre que no se desvirtúe el acto cooperativo.

El trabajo en cooperativas constituidas por otras cooperativas o empresas asociativas

Artículo 38. Los organismos de integración, las cooperativas de cooperativas o las constituidas por entes jurídicos de carácter civil, sin fines de lucro, que requieran contratar el trabajo a fin de realizar las actividades necesarias para alcanzar su objeto, lo harán preferentemente con cooperativas o empresas de la Economía Social y Participativa. El estatuto y reglamentos establecerá las modalidades de gestión que les permitan una amplia participación en la programación, ejecución y evaluación de los procesos cooperativos.

Cogestión y autogestión con entes públicos y privados

Artículo 39. Las cooperativas podrán establecer convenios con el sector público, el de la Economía Social y Participativa y el sector privado, para desarrollar modalidades de trabajo cogestionarias o autogestionarias.

Mecanismos de protección social

Artículo 40. Las cooperativas, por su cuenta, en unión con otras o en coordinación con sus organismos de integración, podrán establecer sistemas y mecanismos de Protección Social, para sus asociados, especialmente a los que aportan directamente su trabajo. Estos sistemas serán financiados con recursos propios de los asociados, de la cooperativa, o provenientes de operaciones y actividades que realicen éstas o los organismos de integración cooperativa, así mismo, con recursos que puedan provenir del Sistema Nacional de Seguridad Social, para atender las necesidades propias de la previsión social.

CAPITULO VI

EDUCACION COOPERATIVA

Elementos del Proceso Educativo en las cooperativas

Artículo 41. Los principales elementos del proceso educativo son:

1. La planificación y evaluación colectiva de la acción cooperativa cotidiana y permanente.

2. El diseño colectivo de estructuras y procesos organizativos que propicien el desarrollo de valores democráticos, solidarios y participativos.
3. Los procesos de formación y capacitación.

Sistemas de reconocimiento y acreditación cooperativo

Artículo 42. Las cooperativas y sus organismos de integración podrán establecer sistemas de formación en materias propias del cooperativismo, coordinando y articulando las actividades educativas de las cooperativas.

Este sistema podrá validar la experticia de los asociados en los diferentes aspectos de la actividad cooperativa adquirida en su trabajo.

Estas acreditaciones podrán ser convalidadas por instituciones educativas en los términos que establezca el Ejecutivo Nacional.

CAPITULO VII

REGIMEN ECONOMICO

Criterios generales

Artículo 43. Las asociaciones cooperativas son empresas de propiedad colectiva, de carácter comunitario que buscan el bienestar integral personal y colectivo.

El diseño, formas y maneras de llevar adelante su actividad económica se definirán autónomamente y deben propiciar la máxima participación de los asociados en la gestión democrática permanente de su propia actividad y en los procesos de generación de recursos

patrimoniales.

Los recursos financieros deberán provenir, principalmente, de los propios asociados, mediante procesos de aportes en dinero o trabajo de ellos mismos y como resultado de la reinversión de excedentes que así decida la asamblea o reunión general de asociados.

Articulación de procesos económicos

Artículo 44. Los servicios que requieran las cooperativas se contratarán preferentemente con otras empresas de la Economía Social y Participativa, en especial con otras cooperativas. Igualmente, las cooperativas ofrecerán al mercado sus bienes y servicios, en lo posible, concertadamente con otras empresas de la Economía Social y Participativa, especialmente cooperativas.

Recursos patrimoniales de las cooperativas

Artículo 45. Los recursos propios de carácter patrimonial son:

1. Las aportaciones de los asociados.
2. Los excedentes acumulados en las reservas y fondos permanentes.
3. Las donaciones, legados o cualquier otro aporte a título gratuito destinado a integrar el capital de la cooperativa.

Aportaciones de los asociados

Artículo 46. Las aportaciones son individuales, y podrán hacerse en dinero, especie o trabajo, convencionalmente valuados, en la forma y plazo que establezca el estatuto. De cualquier tipo de aportaciones se emitirán certificados u otro documento nominativo, representativo de una o más de ellas. Estas aportaciones podrán ser para la constitución del capital necesario, rotativas, de inversión u otras modalidades. El estatuto establecerá las normas para cada tipo de aportación, cuáles podrán recibir interés y cuál será el límite del mismo.

Capital variable e ilimitado

Artículo 47. El monto total del capital constituido por las aportaciones será variable e ilimitado, sin perjuicio de poder establecer en el estatuto una cantidad mínima y procedimientos para la formación e incremento del capital, en proporción con el uso, trabajo y producción real o potencial de los bienes y servicios y de los excedentes obtenidos.

Revalorización

Artículo 48. Las cooperativas podrán revalorizar sus activos de conformidad con las disposiciones que regulan la materia.

Reservas

Artículo 49. Las cooperativas, con cargo a sus excedentes, podrán crear e incrementar reservas especiales para amparar y consolidar el patrimonio, sin perjuicio de otras previsiones que ellas puedan establecer.

Auxilios, donaciones o subvenciones

Artículo 50. Las cooperativas podrán recibir de personas naturales o jurídicas, todo tipo de auxilios, donaciones o subvenciones destinados a incrementar su patrimonio o a ser utilizados de conformidad con la voluntad del donante. En ambos casos estarán orientados al cumplimiento del objeto social.

Irrepartibilidad de las reservas y otros recursos.

Artículo 51. Las reservas de emergencia, el fondo de educación, los otros fondos permanentes, así como los legados, donaciones y cualquier otro bien o derecho patrimonial otorgado a la cooperativa a título gratuito, constituyen patrimonio irrepartible de las cooperativas, en consecuencia no podrán distribuirse entre los asociados a ningún título, ni acrecentarán sus aportaciones individuales.

Recursos de terceros

Artículo 52. Las cooperativas podrán asumir todas las formas de pasivo y emitir obligaciones a suscribir por asociados o terceros.

Las cooperativas deberán aprobar en reuniones generales de asociados o asamblea, las formas o mecanismos que garanticen que los pasivos asumidos para su funcionamiento ordinario o para su crecimiento, serán sustituidos, en el tiempo, con aportes de sus propios asociados y con parte de los excedentes.

Contabilidad

Artículo 53. Las cooperativas llevarán contabilidad conforme con los principios contables generalmente aceptados, aplicables a las cooperativas y establecerán sistemas que permitan que los asociados, las instancias de coordinación y control definidas en los estatutos y el sector cooperativo cuenten con información oportuna y adecuada para la toma de decisiones. El régimen relativo al ejercicio económico se establecerá en el estatuto así como las disposiciones para el ejercicio irregular al inicio de la cooperativa.

Excedente

Artículo 54. El excedente es el sobrante del producto de las operaciones totales de la cooperativa, deducidos los costos y los gastos generales, las depreciaciones y provisiones, después de deducir uno por ciento (1%) del producto de las operaciones totales que se destinará a los fondos de emergencia, educación y protección social por partes iguales.

De los excedentes, una vez deducidos los anticipos societarios, después de ajustarlos, si procediese, de acuerdo a los resultados económicos de la cooperativa, el treinta por ciento (30%) como mínimo se destinará:

1. Diez por ciento (10%) como mínimo, para el fondo de reserva de emergencia que se destinará a cubrir situaciones imprevistas y pérdidas.
2. Diez por ciento (10%) como mínimo, para el fondo de protección social que se utilizará para atender las situaciones especiales de los asociados trabajadores y de los asociados en general.
3. Diez por ciento (10%) como mínimo, para el fondo de educación, para ser utilizado en las actividades educativas y en el sistema de reconocimiento y acreditación.

La asamblea o reunión general de asociados podrá destinar el excedente restante a incrementar los recursos para el desarrollo de fondos y proyectos que redunden en beneficio de los asociados, la acción de la cooperativa y el sector cooperativo y podrán destinarlos para ser repartidos entre los asociados por partes iguales como reconocimiento al esfuerzo colectivo o en proporción a las operaciones efectuadas con la cooperativa, al trabajo realizado en ella y a sus aportaciones.

Cuando una cooperativa tenga pérdidas en su ejercicio económico éstas serán cubiertas con los recursos destinados al fondo de emergencia, si éste fuera insuficiente para enjugarlas, deberán cubrirse con las aportaciones de los asociados.

CAPITULO VIII DE LA INTEGRACION

Integración

Artículo 55. La integración es un proceso económico y social, dinámico, flexible y variado que se desarrollará:

1. Entre las cooperativas.
2. Entre éstas y los entes de la Economía Social y Participativa.
3. Con la comunidad en general.

Objeto de la integración

Artículo 56. El objeto de la integración es:

1. Coordinar las acciones del sector cooperativo, entre sí y con los actores de la Economía Social y Participativa y con la comunidad.
2. Consolidar fuerzas sociales que a la vez que vayan solucionando problemas comunitarios, generen procesos de transformación económica, cultural y social.

Las formas de integración cooperativa

Artículo 57. Las cooperativas podrán integrarse entre ellas mediante acuerdos, convenios y contratos para proyectos y acciones determinadas, así como también mediante asociaciones, fusiones, incorporaciones y escisiones, pudiendo establecer cooperativas de cooperativas y constituir organismos de integración de segundo o más grados, locales, regionales o nacionales.

Integración con la Economía Social y Participativa

Artículo 58. Las cooperativas podrán integrarse con otras empresas de la Economía Social y Participativa mediante acuerdos, convenios y contratos para proyectos y acciones determinadas. Podrán también crear asociaciones con esas empresas y

constituir con ellas, nuevos entes jurídicos de carácter asociativo, conforme al numeral 2 del artículo 18.

Relación con empresas de otro carácter jurídico

Artículo 59. Las cooperativas podrán establecer alianzas, convenios y contratos con personas de otro carácter jurídico con tal de que no desvirtúen sus objetivos.

Organismos de integración

Artículo 60. Los organismos de integración, constituidos por las cooperativas y otros entes de la Economía Social y Participativa, son entes cooperativos, de hecho y derecho y tienen como finalidades:

1. La representación de sus afiliados.
2. La articulación, coordinación y ejecución de políticas y planes de sus afiliados.
3. La coordinación de los sistemas de: conciliación y arbitraje, auditorías, vigilancia y control, estadísticas, comunicación e información y el de reconocimiento y acreditación de educación cooperativa. Los organismos de integración podrán para el cumplimiento de sus finalidades realizar actividades de carácter técnico, educativo, económico, social y cultural.

Sistema de Conciliación y Arbitraje

Artículo 61. Los organismos de integración podrán establecer sistemas locales, regionales o nacionales de conciliación, arbitraje y otros mecanismos para resolver y decidir sobre:

1. Las impugnaciones que los asociados de las cooperativas hicieren acerca de los actos de cualesquiera de las instancias por presunto incumplimiento de las disposiciones de esta Ley, el estatuto y otras normas de la misma cooperativa.
2. Los reclamos que los asociados hicieren a sus cooperativas en relación con su trabajo, por presunto incumplimiento de las disposiciones de esta Ley, el estatuto y demás normas de la cooperativa.
3. Los reclamos y conflictos en el proceso de integración.

Las normas de los sistemas de conciliación y arbitraje, u otros mecanismos, se establecerán en el estatuto y reglamentos internos.

Las decisiones finales que alcancen en los sistemas de conciliación y arbitraje, serán inapelables y de obligatorio cumplimiento para las partes. Contra ellas sólo procederá el recurso de nulidad, el cual deberá interponerse por escrito, independientemente de la cuantía del asunto, ante el tribunal competente del lugar en donde se hubiese dictado el laudo arbitral, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.

Sistemas de auditorías, vigilancia y control

Artículo 62. Los organismos de integración podrán coordinar con las instancias de control de las afiliadas el desarrollo de los sistemas de auditorías, vigilancia, y control.

Obligatoriedad de realizar revisiones integrales

Artículo 63. Las cooperativas deberán remitir los balances económicos y sociales a los organismos de integración y a la Superintendencia Nacional de Cooperativas, en el siguiente trimestre a la finalización del ejercicio económico.

Anualmente todas las cooperativas deberán realizar una revisión integral, efectuada por personas naturales o jurídicas, preferentemente cooperativas, que estén inscritas en el registro, que a tal fin establecerá la Superintendencia Nacional de Cooperativas. Las condiciones, modalidades y características de estas revisiones integrales se establecerán

en un reglamento que se elaborará con participación del Consejo Cooperativo de la Superintendencia Nacional de Cooperativas.

Los resultados de las revisiones integrales o de cualquier otra auditoria que se le realizare deberán ser entregados a la cooperativa, su organismo de integración y a la Superintendencia Nacional de Cooperativas. En las cooperativas, el resultado de las revisiones y auditorías, deberá estar a disposición de todos los asociados al menos ocho (8) días hábiles antes de ser considerado en la primera asamblea que se realice.

Sistema de comunicación e información y estadísticas

Artículo 64. Los organismos de integración establecerán sistemas de comunicación e información y estadísticas, que permitan a los asociados de las cooperativas, las cooperativas y entes vinculados, contar con posibilidades de comunicación y con la información inmediata necesaria, propia y del entorno, para la gestión eficiente de las empresas cooperativas, así como para desarrollar el más amplio proceso de participación.

CAPITULO IX

DISCIPLINA EN LAS COOPERATIVAS

Expresión autogestionaria

Artículo 65. Los procesos disciplinarios y fiscalizadores deben ser expresión autogestionaria. La asamblea o reunión general de asociados de cada cooperativa, organismo de integración y similares, incluirán en el estatuto y reglamentos, el régimen interno de disciplina y señalarán las instancias con responsabilidad para coordinar y aplicar sus disposiciones.

Exclusión y Suspensión de asociados

Artículo 66. Los asociados podrán ser excluidos o suspendidos en sus derechos por las causas previstas en el estatuto y sus reglamentos. El estatuto establecerá el procedimiento para adoptar la suspensión o exclusión y cuales instancias podrán suspender a los asociados. En cualquier caso se garantizará siempre el debido proceso. Se podrá recurrir, en todos los casos, ante la asamblea o reunión general de asociados, ante las instancias de conciliación y arbitraje, si la cooperativa fuese parte de esos sistemas, y de no ser parte, ante los tribunales competentes.

CAPITULO X

REGIMEN EXCEPCIONAL

Causales para establecer regímenes excepcionales

Artículo 67. Los organismos de integración podrán asumir las funciones de la asamblea o reunión general de asociados, sin incluir facultades de disposición de bienes inmuebles, y las funciones de las demás instancias de una cooperativa afiliada, cuando así se haya previsto en el estatuto y se verifique algunos de los siguientes supuestos:

1. La circunstancia de que la cooperativa corra grave e inminente riesgo para su existencia.
2. Después de haberle establecido a la afiliada plazos precisos para corregir incumplimientos graves a las disposiciones de esta Ley, su reglamento y el estatuto y tal corrección no se hubiese logrado.

Los organismos de integración notificarán a la Superintendencia Nacional de Cooperativas del inicio del régimen excepcional y deberán presentarle informe detallado

de todas las actuaciones que se realicen mientras dure este régimen. En cualquier caso este régimen no establece limitaciones a las facultades y acciones que la Superintendencia Nacional de Cooperativas pueda realizar.

Los terceros con interés legítimo y que consideren que la adopción del régimen excepcional no es justificada, podrán recurrir, en los diez (10) días hábiles siguientes del inicio del régimen, ante la Superintendencia Nacional de Cooperativas para que ésta considere la situación y suspenda la medida, si fuese el caso.

Los asociados no podrán desafiliarse, ni la cooperativa podrá ser objeto de embargo, ni de otras acciones judiciales en el período del régimen excepcional.

Duración del régimen excepcional

Artículo 68. El régimen excepcional no podrá durar más de seis (6) meses, pudiendo prorrogarse una sola vez por un período similar. Dentro de ese lapso el equipo de coordinación del régimen excepcional convocará la asamblea o reunión de todos los asociados para informar de la situación y para definir las políticas y medidas a tomar para normalizar el funcionamiento de la cooperativa.

Los integrantes del equipo de coordinación nombrado por el organismo de integración deberán ser; de reconocida solvencia moral, idoneidad para el trabajo a realizar, no asociados de la cooperativa sujeta al régimen y sin conflictos de intereses.

En el momento que se regularice el funcionamiento de la cooperativa se convocará la asamblea o reunión general de asociados de la cooperativa, se rendirá informe de la actuación y hará entrega formal de la administración a quienes la asamblea designe o ratifique.

Si concluidos los seis (6) meses de régimen excepcional y su prórroga, no se hubieren podido solucionar él o los problemas que originaron dicho régimen, se iniciará el proceso de liquidación de la cooperativa de conformidad con lo establecido en esta Ley.

El organismo de integración y las personas naturales que funjan como coordinadores del régimen excepcional será solidariamente responsable de los daños y perjuicios ocasionados a la cooperativa durante la aplicación del régimen.

Régimen excepcional por solicitud de las cooperativas

Artículo 69. Las cooperativas que por falta de medios de pago, se vean en la necesidad de retardar o aplazar la cancelación de sus compromisos, podrán solicitar al tribunal competente que establezca el régimen excepcional con el objeto de poder establecer los acuerdos con los acreedores, trabajadores y terceros interesados que permita recuperar el normal desenvolvimiento de la cooperativa. El tribunal, una vez comprobada la veracidad de los hechos planteados, declarará el régimen excepcional de conformidad con las normas previstas en esta Ley y designará el coordinador o equipo de coordinación del régimen excepcional quién ejercerá sus funciones con las instancias propias de la cooperativa.

Los asociados no podrán desafiliarse, ni la cooperativa podrá ser objeto de acciones judiciales ni embargada desde el momento que presente la solicitud y mientras dure el período del régimen excepcional.

CAPITULO XI

TRANSFORMACION, FUSION, INCORPORACION, ESCISION, SEGREGACION DISOLUCION Y LIQUIDACION

Transformación, fusión, escisión y segregación

Artículo 70. Las cooperativas, para transformarse, fusionarse, escindirse o segregarse deberán aprobarlo en asamblea, realizada de conformidad con el quórum que establezca

el estatuto, con la voluntad de más del setenta y cinco por ciento (75%) de los presentes. Las liquidaciones, modificaciones del estatuto que se deriven de estos procesos y la inscripción de las nuevas cooperativas resultantes, se tramitarán según lo establecido en esta Ley.

Causas de disolución

Artículo 71. Las cooperativas se disolverán por las siguientes causas:

1. Decisión de por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) de los presentes en la asamblea o reunión general de asociados, realizada de conformidad con el quórum que se establezca en el estatuto, convocada para tal fin.
2. La imposibilidad manifiesta de realizar el objeto social de la cooperativa o la conclusión del mismo.
3. Reducción del número de asociados por debajo del mínimo legal establecido en esta Ley, durante un período superior a un año.
4. Transformación, fusión, segregación o incorporación.
5. Reducción del capital por debajo del mínimo establecido por el estatuto por un período superior a un año.
6. Cuando no realice actividad económica o social por más de dos años.
7. Cuando el pasivo supere al activo y no pueda recuperarse la cooperativa después de establecido el régimen excepcional previsto en esta Ley.

Efecto de la disolución

Artículo 72. Disuelta la cooperativa, se procederá inmediatamente a su liquidación, salvo en los casos de fusión, segregación, escisión o incorporación. La cooperativa conservará su personalidad jurídica a ese solo efecto. Los liquidadores deberán comunicar la disolución a la Superintendencia Nacional de Cooperativas.

Disolución por acuerdo de los asociados

Artículo 73. Cuando la disolución fuese acordada por la asamblea o la reunión general de asociados, el representante legal de la cooperativa le comunicará a la Superintendencia Nacional de Cooperativas la decisión tomada. La asamblea o reunión general de asociados nombrará una comisión liquidadora que deberá estar integrada por cinco personas, una designada por los acreedores de la cooperativa y cuatro por la misma asamblea o reunión general de asociados. Esta comisión elaborará en un plazo no mayor de noventa (90) días el proyecto de liquidación y se lo presentará a la asamblea para que esta lo apruebe.

La Superintendencia Nacional de Cooperativas se apoyará en las instancias de control de la cooperativa para supervisar el proceso de liquidación, el cuál se hará conforme lo dictamina esta Ley, en especial lo referente al destino de los fondos irrepartibles.

Disolución por otros causales

Artículo 74. Cuando la disolución resultare de otras causales distintas a la decisión de la asamblea, cualquier persona que demuestre interés legítimo, podrá solicitar ante el juez competente que nombre la comisión liquidadora. El juez verificará si se da la causal de disolución y de ser así, deberá notificar a la Superintendencia Nacional de Cooperativas y nombrar la comisión liquidadora, incorporando en ella un representante del organismo de integración cooperativo al que estuviese afiliada la cooperativa, un representante de los acreedores, y dos representantes de la cooperativa designados por la asamblea o reunión general de asociados. Si en el lapso de quince (15) días hábiles no se hubieren presentado ante el juez todos los representantes señalados, el juez designará los faltantes.

Dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el Juez haya declarado constituida la Comisión Liquidadora, o antes si así lo determina al momento de su constitución, ésta deberá presentar al juez un proyecto de liquidación. El juez resolverá dentro de los diez (10) días siguientes sobre la aprobación del proyecto.

Facultades

Artículo 75. La comisión liquidadora, en caso de disolución voluntaria o por otras causales, ejercerá la representación de la cooperativa. Deberá realizar el activo, cancelar el pasivo, entregar los fondos irrepartibles, actuando con la denominación social y el aditamento en liquidación. El pasivo se cancelará con la siguiente prelación:

1. Obligaciones con los trabajadores no asociados contratados por vía de excepción.

2. Obligaciones con terceros.

3. Fondos irrepartibles y otras obligaciones con el sector cooperativo.

4. Obligaciones con los asociados no trabajadores. Una vez cancelado el pasivo y devuelto el valor de las aportaciones, la comisión liquidadora entregará los fondos irrepartibles, y el remanente que resultare al organismo de integración al que estuviese afiliada la cooperativa, con destino al fondo de educación u a otro fondo irrepartible. En caso de no estar afiliada a ningún organismo de integración, se entregarán a una cooperativa de la localidad, con el destino mencionado.

Extinción de la persona jurídica

Artículo 76. Finalizado el proceso de liquidación, la comisión liquidadora o el juez, según sea el caso, emitirá una certificación de liquidación que será entregada al registro en donde se inscribió la cooperativa para que éste haga constar la extinción de la persona jurídica. Igualmente se enviará copia de la certificación de liquidación a la Superintendencia Nacional de Cooperativas.

CAPITULO XII

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COOPERATIVAS

De la Superintendencia Nacional de Cooperativas.

Artículo 77. Corresponde a la Superintendencia Nacional de Cooperativas ejercer las funciones de control y fiscalización sobre las cooperativas y sus organismos de integración.

Podrá establecer las oficinas o dependencias que fueren necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

Adscripción

Artículo 78. La Superintendencia Nacional de Cooperativas estará integrada a la estructura orgánica y funcional del Ministerio de la Producción y el Comercio y será dirigida por el Superintendente o Superintendente Nacional de Cooperativas.

Del Consejo Cooperativo

Artículo 79. La Superintendencia Nacional de Cooperativas contará con un Consejo Cooperativo que tendrá por objeto brindarle apoyo y asesoría. Las opiniones del Consejo Cooperativo no tendrán efecto vinculante.

Estará integrado por diez miembros, cinco elegidos por todos los organismos de integración del sector cooperativo y cinco designados por el Ejecutivo Nacional.

Del Superintendente o Superintendente

Artículo 80. El Superintendente o la Superintendente Nacional de Cooperativas deberá ser venezolano, mayor de treinta (30) años, de reconocida competencia y solvencia moral, con experiencia no menor de diez (10) años en materia cooperativa y será de libre nombramiento y remoción del Ministro o Ministra de la Producción y el Comercio.

El Superintendente o la Superintendente Nacional y el resto de los funcionarios o funcionarias con cargos directivos en la Superintendencia Nacional de Cooperativas no podrán desempeñar cargos directivos en ninguna cooperativa ni en sus organismos de integración.

Funciones

Artículo 81. La Superintendencia Nacional de Cooperativas tiene las siguientes funciones:

1. Ejercer la fiscalización de las cooperativas de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
2. Organizar un servicio de información sobre las cooperativas con el objeto de facilitar el control de las mismas.
3. Imponer sanciones a las cooperativas de conformidad con las disposiciones de esta Ley.
4. Coordinar con otros organismos oficiales competentes la ejecución de las políticas de control en materia cooperativa.
5. Dictar, dentro del marco de sus competencias, las medidas que fueren necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
6. Emitir las certificaciones a las que se refiere esta Ley.
7. Remitir a los organismos de integración la información y los documentos relacionados con las cooperativas afiliadas para que estos organismos coadyuven en la corrección de las irregularidades detectadas.
8. Las demás que establezca esta Ley.

La fiscalización

Artículo 82. La función de fiscalización de la Superintendencia Nacional de Cooperativas se ejercerá sin perjuicio de la que corresponda a otros organismos oficiales en cuanto a las actividades específicas de las distintas cooperativas. Estos entes públicos deberán tomar en cuenta las especificidades de estas organizaciones derivadas del acto cooperativo.

En ejercicio de su función fiscalizadora la Superintendencia Nacional de Cooperativas tiene las siguientes atribuciones:

1. Requerir la documentación y realizar las investigaciones que sean necesarias.
2. Asistir a las asambleas o reuniones generales de asociados.
3. Suspender las resoluciones de los órganos sociales cuando fueran contrarias a la Ley, el estatuto o los reglamentos.
4. Intervenir a las cooperativas cuando existan motivos que pongan en riesgo, grave e inminente de existencia, previa consulta al Consejo Cooperativo.
5. Solicitar al juez competente la disolución y liquidación de la cooperativa cuando cometan infracciones cuya gravedad aconseje la cesación de su existencia, previa consulta al Consejo Cooperativo.
6. Coordinar su labor con otros organismos competentes por razón de las actividades de las cooperativas.
7. Impedir el uso indebido de la palabra cooperativa conforme a esta Ley.
8. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley.
9. Las demás que establezcan esta Ley.

La Superintendencia Nacional de Cooperativas entregará a los asociados, cooperativas y a los organismos de integración el resultado de las investigaciones y fiscalizaciones que realizare, con el objeto de que sean analizadas y aplicadas las medidas correctivas o para que se ejerzan las acciones a las que hubiere lugar.

La intervención

Artículo 83. La intervención es un procedimiento que tiene como objeto regularizar el funcionamiento de una cooperativa cuando la existencia de ella corra riesgo grave e inminente.

Cuando la Superintendencia Nacional de Cooperativas, realice una investigación de oficio o a instancia de partes y determine riesgo grave e inminente para la existencia de una cooperativa, deberá:

1. Elaborar un informe que evidencie que la cooperativa, por si sola, no puede continuar realizando operaciones de carácter económico.
2. Analizar con el Consejo Cooperativo y con el organismo de integración de la cooperativa, si lo hubiere, el informe elaborado y la procedencia de la medida.

Procedimiento de intervención

Artículo 84. La Superintendencia Nacional de Cooperativas, ordenará iniciar el proceso de intervención, pudiéndolo ejecutar directamente o por acuerdo con los organismos de integración en el ámbito de acción de la cooperativa objeto de la medida. Quién ejecute la intervención deberá regirse por las siguientes disposiciones:

1. Nombrará un interventor o comisión interventora, que tendrá las más amplias facultades para regularizar el funcionamiento de la cooperativa, sin incluir las de disposición de bienes inmuebles.

Asumirá las funciones de la asamblea o reunión general de asociados, y las de las demás instancias de la cooperativa.

2. La intervención no podrá durar más de seis (6) meses, pudiendo prorrogarse una sola vez por el mismo período. Dentro de ese lapso el interventor o comisión interventora, convocará la asamblea o reunión de todos los asociados, para informar de la situación y de las medidas a tomar para normalizar el funcionamiento de la cooperativa.

3. La disposición de bienes inmuebles se realizará sólo con expresa autorización de la Superintendencia Nacional de Cooperativas.

4. En cualquier momento en el que se regularice el funcionamiento de la cooperativa, en el lapso de los seis meses, el interventor o comisión interventora, convocará la asamblea o reunión general de asociados de la cooperativa, se rendirá informe de la actuación y se hará entrega formal de la administración a las autoridades que la asamblea designe o ratifique.

5. Si concluidos los seis (6) meses y su prórroga, si la hubiere, y persisten las causas y situación, que originaron la intervención, la Superintendencia Nacional de Cooperativas iniciará el trámite de liquidación de la cooperativa.

6. Mientras dure la intervención, los asociados no podrán desafiliarse, ni la cooperativa podrá ser objeto de acciones judiciales ni de embargo.

7. La remuneración del interventor o comisión interventora será fijada por la Superintendencia Nacional de Cooperativas, en coordinación con el ente que ejecute la medida, teniendo en cuenta la capacidad económica de la cooperativa.

8. Durante la intervención, el interventor o comisión interventora, deberá informar al ente que ejecute la intervención y a la Superintendencia Nacional de Cooperativas de todas las medidas acordadas.

9. Al finalizar la intervención, el interventor o la comisión interventora deberá presentar un informe detallado de su actuación al ente ejecutor de la medida y a la Superintendencia Nacional Cooperativa.

Recursos

Artículo 85. Contra las resoluciones de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, podrán interponerse los recursos administrativos a los que hubiere lugar de conformidad con lo establecido en las leyes que regulan la materia.

CAPITULO XIII

RELACIONES CON EL ESTADO Y OTROS SECTORES SOCIALES

Medios de participación y protagonismo

Artículo 86. Los medios para hacer efectiva la participación y protagonismo del pueblo en lo social y económico, a través de las cooperativas, serán los siguientes:

1. Se podrán desarrollar cualquier tipo de actividad lícita económica y social, salvo aquellas que el Estado se reserve en exclusividad según lo establecido en la Constitución, sin que se puedan establecer restricciones legales o de otra índole en relación con el objeto de su actividad.

2. Se promoverá la participación del Sector Cooperativo en establecimiento de políticas económicas y sociales, así como en el análisis y ejecución de los planes y presupuestos en aquellos ámbitos que afecten su funcionamiento.

3. Se estimulará y promoverá la participación del Sector Cooperativo en los procesos de integración internacional de Venezuela, en especial en procesos de integración económica, cultural y social con empresas de la economía social de otros países.

Prestación de servicios públicos

Artículo 87. Las cooperativas como formas de organización de la comunidad, podrán ser sujetos de transferencia de la gestión de los servicios públicos, previa demostración de su capacidad para prestarlos. A tal efecto, éstos podrán otorgarse en concesión en los términos previstos en la ley especial que regula esta materia.

Promoción de las Cooperativas

Artículo 88. La promoción de las cooperativas será principalmente responsabilidad de los asociados, de las cooperativas, y del Sector Cooperativo. Los organismos de integración cooperativa actuarán coordinadamente en dicha promoción.

El Estado en sus diferentes niveles y expresiones coordinarán, conjuntamente con los organismos de integración cooperativo, las acciones de promoción.

Modos de promoción y protección del Estado

Artículo 89. El Estado, mediante los organismos competentes, realizará la promoción de las cooperativas por medio de los siguientes mecanismos:

1. El apoyo a los planes de desarrollo que las cooperativas y organismos de integración elaboren y presenten.

2. El establecimiento de sistemas de formación y capacitación y de prácticas cooperativas, en todos los niveles y expresiones del sistema educativo nacional, público y privado, así como en los centros de trabajo, y en las expresiones organizativas de la sociedad, como soporte para la promoción de la cultura, de la participación responsable y de la solidaridad.

3. El reconocimiento y la acreditación de la acción educativa que realicen las cooperativas y en especial las cooperativas de carácter educativo, cuando se cumplan los requisitos de la normativa que regula la materia.

4. El estímulo a todas las expresiones de la Economía Social y Participativa, particularmente las cooperativas.

5. El impulso a la participación de los trabajadores y la comunidad en la gestión de las empresas públicas y privadas, mediante fórmulas cooperativas, autogestionarias o cogestionarias.

6. La difusión amplia, por los diferentes medios de comunicación, de experiencias nacionales e internacionales de organización de la población, para enfrentar la solución de sus problemas, mediante cooperativas y otras empresas asociativas.

7. La realización de compras de bienes y servicios, con preferencia a las cooperativas.

8. El establecimiento de preferencias en las concesiones que el Estado otorgue para actividades productivas y de servicios que realicen las cooperativas.

9. El establecimiento de condiciones legales, sociales y económicas que faciliten el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas financieros propios de las cooperativas.

10. El fortalecimiento de los fondos que los entes financieros del sector público y privado destinen al financiamiento cooperativo y el establecimiento de condiciones preferenciales en el otorgamiento de todo tipo de financiamiento.

11. La exención de impuestos nacionales directos, tasas, contribuciones especiales y derechos registrales, en los términos previstos en la ley de la materia y en las disposiciones reglamentarias de la presente Ley.

12. En igualdad de condiciones, las cooperativas serán preferidas por los institutos financieros y crediticios del Estado; de igual manera se preferirá a las cooperativas en la adquisición y prestación de bienes y servicios por parte de los entes públicos.

13. El fortalecimiento de los sistemas y mecanismos de protección social que desarrollen el Sector Cooperativo y las cooperativas.

Los estados y municipios, con el fin de contribuir con la promoción y protección que de las cooperativas hace el Estado, y, en consideración del carácter generador de beneficios colectivos de estas asociaciones, en sus leyes y ordenanzas, establecerán disposiciones para promover y proteger a las cooperativas en coherencia con lo establecido en esta Ley.

Certificación de cumplimiento

Artículo 90. Los organismos oficiales, para otorgar la protección y preferencias establecidas en el presente capítulo a favor de las cooperativas, deberán exigirles la presentación de una certificación de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley en lo referente al trabajo asociado y del uso de los excedentes provenientes de actividades de obtención de bienes y servicios en operaciones con terceros.

Las cooperativas solicitarán a la Superintendencia Nacional de Cooperativas la emisión de estas certificaciones.

CAPITULO XIV DE LAS SANCIONES

Sanciones

Artículo 91. La Superintendencia Nacional de Cooperativas, una vez efectuada las investigaciones que comprueben fehacientemente que se ha incurrido en alguna de las causales establecidas taxativamente en esta Ley, impondrá a las personas naturales o jurídicas, asociadas o cooperativas, las siguientes sanciones:

1. Multas.
2. Suspensión de certificación.

En caso de reincidencia se impondrá la multa que corresponda, más el cincuenta por ciento (50%) de la aplicada en la oportunidad anterior.

De persistir esta situación de reincidencia, la Superintendencia Nacional de Cooperativas, procederá a suspender toda certificación emitida según las disposiciones de esta Ley y a realizar la solicitud de disolución y liquidación, según lo establecido en esta Ley.

De la reincidencia y la reiteración

Artículo 92. A los efectos de esta Ley, se considera reincidencia el hecho de que el infractor, después de una resolución firme sancionatoria, cometiere una o varias infracciones de la misma o de diferente índole durante los dos (2) años contados a partir de aquellas.

A los mismos efectos se considera reiteración el hecho de que el infractor cometiere una nueva infracción de la misma índole dentro del término de dos (2) años después de la anterior, sin que hubiese sido impuesta sanción mediante resolución firme.

Multas hasta 1.000 unidades tributarias

Artículo 93. La Superintendencia Nacional de Cooperativas impondrá multas equivalentes en bolívars hasta 1.000 unidades tributarias a las personas naturales o a las personas jurídicas, incurso en las siguientes causales:

1. El incumplimiento de la obligación de remitir a la Superintendencia Nacional de Cooperativas la copia simple registrada o el acta de constitución registrada y los estatutos aprobados y sus modificaciones.
2. Por establecer requisitos económicos o de otra naturaleza que dificulten a los trabajadores de las cooperativas incorporarse como asociados.
3. El no llevar un registro de todos los asociados, ni llevar archivos y registros de las actas.
4. Por ejercer cargos en las diferentes instancias de la cooperativa por más tiempo de lo establecido en esta Ley y en los estatutos.
5. Por no llevar contabilidad actualizada de conformidad con lo establecido en esta Ley.

Multas hasta 1.500 unidades tributarias

Artículo 94. La Superintendencia Nacional de Cooperativas impondrá multas equivalentes en bolívares hasta 1.500 unidades tributarias a las personas naturales, o a las personas jurídicas, incurso en las siguientes causales:

1. Por el incumplimiento en la constitución de los fondos establecidos en esta Ley.
2. Por no realizar las revisiones integrales establecidas en esta Ley.
3. Por incumplimiento del procedimiento relacionado con la disolución y liquidación, en especial el correcto destino de los fondos irrepartibles.
4. Cuando se realicen actividades que obstaculicen el ejercicio de las funciones de la Superintendencia Nacional de Cooperativas.

Suspensión de certificaciones

Artículo 95. Cuando las cooperativas contraten en forma permanente los servicios de trabajadores no asociados, contraviniendo las disposiciones de esta Ley o distribuyan entre los asociados los excedentes resultantes de operaciones con no asociados en actividades de obtención, corresponderá la suspensión de certificaciones. Concurrentemente se aplicarán las multas entre 151 y 350 unidades tributarias a las personas o a las entidades responsables y se iniciará el trámite para su disolución y liquidación.

Cierre de establecimientos

Artículo 96. Cuando entidades no constituidas conforme a la presente Ley utilicen la denominación cooperativa y abreviaturas de esa palabra, se impondrá multa equivalente en bolívares, entre cien (100) y doscientas (200) unidades tributarias y se solicitará a la primera autoridad civil del municipio en donde realiza sus actividades el infractor, el uso de la fuerza pública para la clausura del establecimiento hasta que se subsane la irregularidad.

CAPITULO XV

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

Artículo 97. Los procedimientos para la determinación de las infracciones se iniciarán de oficio o por denuncia oral, que será recogida por escrito.

Artículo 98. La denuncia o, en su caso, el acto de apertura deberá contener:

1. La identificación del denunciante y del presunto infractor.
2. La dirección del lugar donde se practicarán las notificaciones pertinentes
3. Los hechos denunciados expresados con claridad.
4. Referencia a los anexos que se acompañan, si es el caso.
5. Las firmas de los denunciantes.
6. Cualesquiera otras circunstancias que permitan el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 99. El procedimiento se iniciará por la Superintendencia Nacional de Cooperativas, mediante acto de apertura dictado por el Superintendente o Superintendente, o por el funcionario a quien éste delegue, que ordenará la formación del expediente.

Artículo 100. El acto de apertura deberá ser motivado y establecer con claridad los hechos imputados y las consecuencias que pudiesen desprenderse de la constatación de los mismos.

Artículo 101. Dentro del lapso de diez (10) días hábiles siguientes, la Superintendencia Nacional de Cooperativas deberá notificar el acto de apertura al presunto infractor, para que en un lapso de quince (15) días hábiles, consigne los alegatos y pruebas que estime pertinentes para su defensa.

Artículo 102. La Consultoría Jurídica de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, sustanciará el expediente, el cual deberá contener los actos, documentos, declaraciones, experticias, informes y demás elementos de juicio necesarios para establecer la verdad de los hechos. Cualquier particular interesado podrá consignar en el expediente, los documentos que estime pertinentes a los efectos del esclarecimiento de los hechos.

Artículo 103. En la sustanciación del procedimiento la Superintendencia Nacional de Cooperativas, oída la opinión de la Consultoría Jurídica, tendrá las más amplias potestades de investigación, respetando el principio de libertad de prueba.

Artículo 104. La Superintendencia Nacional de Cooperativas, a través de la Consultoría Jurídica, a los fines de la debida sustanciación, podrá realizar, entre otros, los siguientes actos:

1. Requerir de las personas relacionadas con el procedimiento, los documentos o informaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.
2. Emplazar, mediante la prensa nacional o regional, a cualquier persona interesada que pudiese suministrar información relacionada con la presunta infracción.
3. Solicitar a otros organismos públicos, información respecto a los hechos investigados o a las personas involucradas.
4. Realizar u ordenar las inspecciones que considere pertinentes a los fines de la investigación.
5. Evacuar las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 105. La Superintendencia Nacional de Cooperativas, una vez iniciado el procedimiento, podrá adoptar las siguientes medidas cautelares:

1. Ordenar la suspensión inmediata, total o parcial, de las actividades presuntamente infractoras.
2. Ordenar la realización de actos o actividades provisionales hasta tanto se decida el asunto.

Artículo 106. Para la adopción de las medidas establecidas en el artículo anterior, la Superintendencia Nacional de Cooperativas actuará con la debida ponderación de las circunstancias, tomando en cuenta los perjuicios graves que pudiesen sufrir los interesados, afectados por la conducta del presunto infractor y los daños que pudiesen ocasionarse con la adopción de la medida, atendiendo al buen derecho que emergiere de la situación.

Artículo 107. Las medidas cautelares podrán ser dictadas con carácter provisionalísimo, en el acto de apertura del procedimiento y sin cumplir con los extremos a los cuales se refiere el artículo anterior, cuando por razones de urgencia se ameriten. Ejecutada la medida provisionalísima, la Superintendencia Nacional de Cooperativas deberá pronunciarse, dentro del lapso de cinco (5) días hábiles, confirmando, modificando o revocando la medida adoptada, en atención a lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 108. Acordada la medida cautelar, se notificará a los interesados directos y terceros interesados. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación, el interesado podrá oponerse a la medida.

Formulada la oposición, se abrirá un lapso de ocho (8) días hábiles, dentro del cual el opositor podrá hacer valer sus alegatos y pruebas. La Superintendencia decidirá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del lapso anterior.

Artículo 109. La Superintendencia Nacional de Cooperativas, procederá a revocar la medida cuando estime que sus efectos no se justifican. En todo caso, los efectos de las medidas cautelares que se hubieren dictado, cesarán al dictarse la decisión que ponga fin al procedimiento o transcurra el plazo para dictar la decisión definitiva sin que esta se hubiere producido.

Artículo 110. La sustanciación del expediente deberá concluirse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al acto de apertura, pudiendo prorrogarse, por una sola vez, hasta por cinco (5) días hábiles, cuando la complejidad del asunto así lo requiera.

Artículo 111. Concluida la sustanciación o transcurrido el lapso para ello, la Superintendencia Nacional de Cooperativas decidirá dentro los diez (10) días hábiles siguientes, este lapso podrá ser prorrogado, por una sola vez, hasta por cinco (5) días hábiles, cuando la complejidad del asunto así lo requiera.

En caso de que no se produzca la decisión en los lapsos previstos en este artículo, el denunciante o el presunto infractor podrán recurrir, en el lapso de tres (3) días hábiles, por ante el Ministro de la Producción y el Comercio, para que éste decida en un lapso de quince (15) días hábiles.

Artículo 112. En la decisión se determinará la existencia o no de las infracciones y en caso afirmativo, se establecerán las sanciones correspondientes, así como los correctivos a que hubiere lugar.

Artículo 113. La persona natural o jurídica, asociación o cooperativa sancionada ejecutará voluntariamente lo decidido, dentro del lapso que al efecto imponga el acto sancionatorio, en caso contrario se procederá a la ejecución forzosa de conformidad con lo establecido en la ley que regule la materia de procedimientos administrativos.

Artículo 114. En todo lo no previsto en este Decreto Ley en materia de procedimientos administrativos, se aplicará supletoriamente la ley que regule la materia.

DISPOSICION DEROGATORIA

Unica. Se deroga la Ley General de Asociaciones Cooperativas, sancionada el 16 de mayo de 1975, mediante Decreto N° 922 publicada en la Gaceta Oficial de la República, Extraordinaria N° 1.750 de fecha 27 de mayo de 1975 y se deroga parcialmente el Reglamento de dicha ley dictado por Decreto N° 3.056 del 6 de febrero de 1979, manteniendo vigente los artículos 106, 107 salvo el literal e, 108 y 110.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Registro

Primera. El registro de cooperativas, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, ante las Oficinas Subalternas de Registro, se iniciará en un plazo de treinta (30) días después de la entrada en vigencia de la misma.

Consejo Cooperativo

Segunda. La Superintendencia Nacional de Cooperativas convocará, en un lapso de sesenta (60) días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, a una reunión de todos los organismos de integración con el objeto de que ellos seleccionen a los cinco integrantes del primer Consejo Cooperativo y se constituya formalmente con la participación de los designados por el Ejecutivo Nacional.

Acreencias Contra las Cooperativas

Tercera. Todas las acreencias que contra las cooperativas tengan los entes financieros, fundaciones, corporaciones y otros entes vinculados al Poder Nacional, se transfieren al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela para que éste, con esos recursos, constituya un Fideicomiso que tendrá como objeto el fomento y desarrollo de los Sistemas Financieros propios de las cooperativas. Esta disposición incluye a los entes del Estado en proceso de liquidación.

El fiduciario administrará el fideicomiso mediante un comité administrativo constituido por cinco miembros, tres designados por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela y dos elegidos por todos los organismos de integración de las cooperativas.

El fideicomiso apoyará la constitución o consolidación de cooperativas de carácter financiero y los sistemas, mecanismos y otras modalidades de financiamiento, que los organismos de integración y otras cooperativas puedan establecer, siempre y cuando, estos entes cooperativos aporten o capitalicen, un porcentaje de los montos que soliciten del Fideicomiso.

Las políticas y normas para la administración de este fideicomiso se establecerán en un reglamento que elaborará el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela en consulta con la representación que designen todos los organismos de integración de las cooperativas.

Tribunales Competentes

Cuarta. Hasta tanto no se cree la jurisdicción especial en materia asociativa, los tribunales competentes para conocer de las acciones y recursos judiciales previstos en esta Ley, son los tribunales de Municipio, independientemente de la cuantía del asunto. Para su tramitación se aplicará el procedimiento del juicio breve previsto en el Código de Procedimiento Civil.

DISPOSICIONES FINALES

ADECUACION Y MODIFICACION DE ESTATUTOS

Primera. Los estatutos de las cooperativas de todo grado deberán ser ajustados a las disposiciones de la presente Ley, en el término de un año, a partir de la publicación de la misma.

Vigencia

Segunda. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los treinta días del mes de agosto de dos mil uno. Año 191° de la Independencia y 142° de la Federación.

(L.S.)

HUGO CHAVEZ FRIAS

Refrendado

La Vicepresidenta Ejecutiva

(L.S.)

ADINA MERCEDES BASTIDAS CASTILLO

Refrendado

El Ministro del Interior y Justicia

(L.S.)
LUIS MIQUILENA
Refrendado
El Ministro de Finanzas
(L.S.)
NELSON JOSE MERENTES DIAZ
Refrendado
El Ministro de la Defensa
(L.S.)
JOSE VICENTE RANGEL
Refrendado
La Ministra de la Producción y el Comercio
(L.S.)
LUISA ROMERO BERMUDEZ
Refrendado
El Ministro de Educación, Cultura y Deportes
(L.S.)
HECTOR NAVARRO DIAZ
Refrendado
La Ministra de Salud y Desarrollo Social
(L.S.)
MARIA URBANEJA DURANT
Refrendado
La Ministra del Trabajo
(L.S.)
BLANCANIEVE PORTOCARRERO
Refrendado
El Ministro de Infraestructura
(L.S.)
ISMAEL ELIEZER HURTADO SOUCRE
Refrendada
El Ministro de Energía y Minas
(L.S.)
ALVARO SILVA CALDERON
Refrendado
La Ministra del Ambiente y de los Recursos Naturales
(L.S.)
ANA ELISA OSORIO GRANADO
Refrendado
El Ministro de Planificación y Desarrollo
(L.S.)
JORGE GIORDANI
Refrendado
El Ministro de Ciencia y Tecnología
(L.S.)
CARLOS GENATIOS SEQUERA
Refrendado
El Ministro de la Secretaría de la Presidencia
(L.S.)
DIOSDADO CABELLO RONDON

• **LEY ORGÁNICA DEL PODER POPULAR**

DISPOSICIONES GENERALES

Martes, 01 de Febrero de 2011 15:46

Capítulo I

Disposiciones generales

Objeto

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto desarrollar y consolidar el Poder Popular, generando condiciones objetivas a través de los diversos medios de participación y organización establecidos en la Constitución de la República, en la ley y los que surjan de la iniciativa popular, para que los ciudadanos y ciudadanas ejerzan el pleno derecho a la soberanía, la democracia participativa, protagónica y corresponsable, así como a la constitución de formas de autogobierno comunitarias y comunales, para el ejercicio directo del poder.

Poder Popular

Artículo 2. El Poder Popular es el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional, y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad, a través de sus diversas y disímiles formas de organización, que edifican el estado comunal.

Dimensión

Artículo 3. El Poder Popular se fundamenta en el principio de soberanía y el sentido de progresividad de los derechos contemplados en la Constitución de la República, cuyo ejercicio y desarrollo está determinado por los niveles de conciencia política y organización del pueblo.

Finalidad

Artículo 4. El Poder Popular tiene por finalidad garantizar la vida y el bienestar social del pueblo, mediante la creación de mecanismos para su desarrollo social y espiritual, procurando la igualdad de condiciones para que todos y todas desarrollen libremente su personalidad, dirijan su destino, disfruten los derechos humanos y alcancen la suprema felicidad social; sin discriminaciones por motivos de origen étnico, religioso, condición social, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, opinión política, nacionalidad u origen, edad, posición económica, condición de discapacidad o cualquier otra circunstancia personal, jurídica o social, que tenga por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y garantías constitucionales

Principios y valores

Artículo 5. La organización y participación del pueblo en el ejercicio de su soberanía se inspira en la doctrina del Libertador Simón Bolívar, y se rige por los principios y valores socialistas de: democracia participativa y protagónica, interés colectivo, equidad, justicia, igualdad social y de género, complementariedad, diversidad cultural, defensa de los derechos humanos, corresponsabilidad, cogestión, autogestión, cooperación, solidaridad, transparencia, honestidad, eficacia, eficiencia, efectividad, universalidad, responsabilidad, deber social, rendición de cuentas, control social, libre debate de ideas, voluntariedad, sustentabilidad, defensa y protección ambiental, garantía de los derechos de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes, y de toda persona en situación de vulnerabilidad, defensa de la integridad territorial y de la soberanía nacional.

Ámbito de aplicación

Artículo 6. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a todas las organizaciones, expresiones y ámbitos del Poder Popular, ejercidas directa o indirectamente por las personas, las comunidades, los sectores sociales, la sociedad en general y las situaciones que afecten el interés colectivo, acatando el principio de legalidad en la formación, ejecución y control de la gestión pública.

Fines del Poder Popular

Artículo 7. El Poder Popular tiene como fines:

1. Impulsar el fortalecimiento de la organización del pueblo, en función de consolidar la democracia protagónica revolucionaria y construir las bases de la sociedad socialista, democrática, de derecho y de justicia.
2. Generar las condiciones para garantizar que la iniciativa popular, en el ejercicio de la gestión social, asuma funciones, atribuciones y competencias de administración, prestación de servicios y ejecución de obras, mediante la transferencia desde los distintos entes político-territoriales hacia los autogobiernos comunitarios, comunales y los sistemas de agregación que de los mismos surjan.
3. Fortalecer la cultura de la participación en los asuntos públicos para garantizar el ejercicio de la soberanía popular.
4. Promover los valores y principios de la ética socialista: la solidaridad, el bien común, la honestidad, el deber social, la voluntariedad, la defensa y protección del ambiente y los derechos humanos.
5. Coadyuvar con las políticas de Estado en todas sus instancias, con la finalidad de actuar coordinadamente en la ejecución del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y los demás planes que se establezcan en cada uno de los niveles políticos-territoriales y las instancias político-administrativas que la ley establezca.
6. Establecer las bases que permitan al pueblo organizado el ejercicio de la contraloría social para asegurar que la inversión de los recursos públicos se realice de forma eficiente para el beneficio colectivo; y vigilar que las actividades del sector privado con incidencia social se desarrollen en el marco de las normativas legales de protección a los usuarios y consumidores.
7. Profundizar la corresponsabilidad, la autogestión y la cogestión.

Definiciones

Artículo 8. A los efectos de la presente Ley se entiende por:

1. Asamblea de ciudadanos y ciudadanas: Máxima instancia de participación y decisión de la comunidad organizada, conformada por la integración de personas con cualidad jurídica, según la ley que regule la forma de participación, para el ejercicio directo del poder y protagonismo popular, cuyas decisiones son de carácter vinculante para la comunidad, las distintas formas de organización, el gobierno comunal y las instancias del Poder Público, de acuerdo a lo que establezcan las leyes que desarrollen la constitución, organización y funcionamiento de los autogobiernos comunitarios, comunales y los sistemas de agregación que de éstos surjan.
2. Autogestión: Conjunto de acciones mediante las cuales las comunidades organizadas asumen directamente la gestión de proyectos, ejecución de obras y prestación de servicios para mejorar la calidad de vida en su ámbito geográfico.
3. Cogestión: Proceso mediante el cual las comunidades organizadas coordinan con el Poder Público, en cualquiera de sus niveles e instancias, la gestión conjunta para la ejecución de obras y prestación de servicios necesarios para mejorar la calidad de vida en su ámbito geográfico.
4. Comunidad: Núcleo espacial básico e indivisible constituido por personas y familias que habitan en un ámbito geográfico determinado, vinculadas por características e intereses comunes que comparten una historia, necesidades y potencialidades culturales, económicas, sociales, territoriales y de otra índole.
5. Comunidad organizada: Constituida por las expresiones organizativas populares, consejos de trabajadores y trabajadoras, de campesinos y campesinas, de pescadores y pescadoras y cualquier otra organización social de base, articulada a una instancia del Poder Popular debidamente reconocida por la ley y registrada en el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana.
6. Control social: Es el ejercicio de la función de prevención, vigilancia, supervisión, acompañamiento y control, practicado por los ciudadanos y ciudadanas de manera individual o colectiva sobre la gestión del Poder Público y de las instancias del Poder Popular, así como de las actividades privadas que afecten el interés colectivo.
7. Corresponsabilidad: Responsabilidad compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y las instituciones del Estado en el proceso de formación, ejecución, control y evaluación de la gestión social, comunitaria y comunal, para el bienestar de las comunidades organizadas.
8. Estado comunal: Forma de organización político social, fundada en el Estado democrático y social de derecho y de justicia establecido en la Constitución de la República, en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad social de los venezolanos y venezolanas en la sociedad socialista. La célula fundamental de conformación del estado comunal es la Comuna.
9. Instancias del Poder Popular: Constituidas por los diferentes sistemas de agregación comunal y sus articulaciones, para ampliar y fortalecer la acción del autogobierno comunal: consejos comunales, comunas, ciudades comunales, federaciones comunales, confederaciones comunales y las que, de conformidad con la Constitución de la República, la ley que regule la materia y su reglamento, surjan de la iniciativa popular.
10. Organizaciones de base del Poder Popular: Son aquellas constituidas por ciudadanos y ciudadanas para la búsqueda del bienestar colectivo.
11. Planificación participativa: Forma de participación de los ciudadanos y ciudadanas en el diseño, formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas.
12. Presupuesto participativo: Mecanismo mediante el cual los ciudadanos y ciudadanas proponen, deliberan y deciden sobre la formulación, ejecución, control y evaluación de los presupuestos públicos, con el propósito de materializar los proyectos que permitan el desarrollo de las comunidades y el bienestar social general.
13. Sistema económico comunal: Conjunto de relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimiento, desarrolladas por las instancias del Poder Popular, el Poder Público, o por acuerdo entre ambos, a través de organizaciones socio-productivas bajo formas de propiedad social comunal.
14. Socialismo: es un modo de relaciones sociales de producción centrado en la convivencia solidaria y la satisfacción de necesidades materiales e intangibles de toda la sociedad, que tiene como base fundamental la recuperación del valor del trabajo como productor de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas y lograr la suprema felicidad social y el desarrollo humano integral. Para ello es necesario el desarrollo de la propiedad social sobre los factores y medios de producción básicos y estratégicos que permita que todas las familias, ciudadanos venezolanos y ciudadanas venezolanas posean, usen y disfruten de su patrimonio, propiedad individual o familiar, y ejerzan el pleno goce de sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales.

- **LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA ECONÓMICO COMUNAL**

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Objeto

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto desarrollar y fortalecer el Poder Popular, estableciendo las normas, principios, y procedimientos para la creación, funcionamiento y desarrollo del Sistema Económico Comunal, integrado por organizaciones socioproductivas bajo régimen de propiedad social comunal, impulsadas por las instancias del Poder Popular, el Poder Público, o por acuerdo entre ambos, para la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos, para satisfacer las necesidades colectivas y reinvertir socialmente el excedente, mediante una planificación estratégica, democrática y participativa.

Sistema Económico Comunal

Artículo 2. Conjunto de relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos, desarrolladas por las instancias del Poder Popular, el Poder Público, o por acuerdo entre ambos, a través de organizaciones socioproductivas bajo formas de propiedad social comunal.

Ámbito de aplicación

Artículo 3. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a las comunidades organizadas, consejos comunales, comunas y todas las instancias y expresiones del Poder Popular, en especial a las organizaciones socioproductivas que se constituyan dentro del Sistema Económico Comunal; y de igual manera, a los órganos y entes del Poder Público y las organizaciones del sector privado, en sus relaciones con las instancias del Poder Popular.

Finalidades

Artículo 4. La presente Ley tiene por finalidad:

1. Garantizar la participación popular en el proceso económico-productivo.
2. Impulsar el Sistema Económico Comunal a través de un modelo de gestión sustentable y sostenible para el fortalecimiento del desarrollo endógeno.
3. Fomentar el Sistema Económico Comunal en el marco del modelo productivo socialista, a través de diversas formas de organización socioproductiva, comunitaria y comunal en todo el territorio nacional.
4. Dotar a la sociedad de medios y factores de producción que garanticen la satisfacción de las necesidades humanas, consolidar el ejercicio de la soberanía nacional y contribuir al desarrollo humano integral para alcanzar la Suprema Felicidad Social.
5. Asegurar la producción, justa distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos, generados por las diferentes formas de organización socioproductiva, orientados a satisfacer las necesidades colectivas.
6. Promover un sistema de financiamiento para apoyar las iniciativas de las comunidades sobre proyectos socioproductivos sustentables, con criterios de equidad y justicia social, donde se reconozcan los saberes, el conocimientos y las potencialidades locales como elementos constitutivos de garantía para la viabilidad y el cumplimiento.
7. Promover la articulación en redes, por áreas de producción y servicios, de las organizaciones socioproductivas comunitarias y comunales, para asegurar su desarrollo, consolidación y expansión.
8. Incentivar en las comunidades y las comunas los valores y principios socialistas para la educación, el trabajo, la investigación, el intercambio de saberes y conocimientos, y la solidaridad, como medios para alcanzar el bien común.
9. Promover la formación integral de las organizaciones socioproductivas en la planificación productiva basada en la sustentabilidad y sostenibilidad, la retornabilidad de los recursos, el deber social, la cultura de ahorro y la reinversión social del excedente.
10. Garantizar la formación y la acreditación de saberes y conocimientos en materia política, técnica y productiva de los ciudadanos y ciudadanas, integrantes o por integrar las organizaciones socioproductivas impulsadas por esta Ley.

Principios y valores

Artículo 5. El Sistema Económico Comunal, como herramienta fundamental para construcción de la nueva sociedad socialista, se inspira en la doctrina del Libertador Simón Bolívar, y se rige por los principios y valores socialistas de: democracia participativa y protagónica, interés colectivo, propiedad social, equidad, justicia, igualdad social, complementariedad, primacía de los intereses colectivos, diversidad cultural,

defensa de los derechos humanos, corresponsabilidad, cogestión, autogestión, cooperación, solidaridad, transparencia, honestidad, eficacia, eficiencia, efectividad, universalidad, responsabilidad, deber social, rendición de cuentas, control social, libre debate de ideas, voluntariedad, sustentabilidad, defensa y protección ambiental; garantía de los derechos de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes, y toda persona en situación de vulnerabilidad; y defensa de la integridad territorial y de la soberanía nacional.

Definiciones

Artículo 6. A los efectos de la presente Ley, se entiende por:

1. **Acreditación de saberes y conocimientos:** Reconocimiento público y formal del dominio de prácticas culturales, tradicionales o ancestrales, o del conocimientos o capacidad demostrada por una persona, para desempeñar eficientemente una determinada actividad laboral, acreditada por el órgano con competencia en la materia y las instituciones autorizadas por éste.
2. **Banco de la Comuna:** Organización económico-financiera de carácter social que gestiona, administra, transfiere, financia, facilita, capta y controla, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Comunal, los recursos financieros y no financieros de ámbito comunal, retornables y no retornables, impulsando las políticas económicas con la participación democrática y protagónica del pueblo, bajo un enfoque social, político, económico y cultural para la construcción del Modelo Productivo Socialista.
3. **Ciclo productivo comunal:** Sistema de producción, transformación, distribución, intercambio y consumo socialmente justo de bienes y servicios de las distintas formas de organización socioproductivas, surgidas en el seno de la comunidad como consecuencia de las necesidades humanas.
4. **Comercialización:** Comprende una serie de actividades interconectadas que van desde la planificación de la producción, embalaje, transporte, almacenamiento, hasta la distribución y venta.
5. **Comité de Economía Comunal:** Es la instancia encargada de la planificación y coordinación de la actividad económica del Consejo Comunal. Se constituye para la vinculación y articulación entre las organizaciones socioproductivas y la comunidad, para los planes y proyectos socioproductivos.
6. **Consejo de Economía Comunal:** Es la instancia encargada de la promoción del desarrollo económico de la Comuna y la articulación de los Comités de Economía Comunal.
7. **Consumo:** Momento en que el bien o servicio cumple con la satisfacción de consumidor o consumidora, del usuario o usuaria.
8. **Distribución:** Medio o medios necesarios para hacer llegar físicamente el producto (bien o servicio) a los consumidores y consumidoras.
9. **Gestión económica comunal:** Conjunto de acciones que se planifican, organizan, dirigen, ejecutan y controlan de manera participativa y protagónica, en función de coadyuvar en la generación de nuevas relaciones sociales de producción que satisfagan las necesidades colectivas de las comunidades y las comunas, para contribuir al desarrollo integral del país.
10. **Instancias de Poder Popular:** Constituidas por los diferentes Sistemas de Agregación Comunal: Consejos Comunales, Comunas, Federaciones Comunales, Confederaciones Comunales y los que, de conformidad con la Constitución y la Ley, surjan de la iniciativa popular.
11. **Mercados de trueque comunitario:** Son espacios físicos destinados periódicamente al intercambio justo y solidario de bienes, servicios, saberes y conocimientos, con el uso de monedas comunales.
12. **Modelo productivo socialista:** Modelo de producción basado en la propiedad social, orientado hacia la eliminación de la división del trabajo del modelo capitalista, dirigido a satisfacer las necesidades crecientes de la población a través de nuevas formas de generación y apropiación, así como la reinversión social del excedente.
13. **Producción:** Conjunto de fuerzas productivas y relaciones que los productores y productoras establecen entre sí para producir los bienes necesarios para su desarrollo.
14. **Productores y productoras:** Integrantes de las organizaciones socioproductivas que conforman el Sistema Económico Comunal, que ejercen el control social de la producción, de manera directa o en conjunto con la representación del poder Público, según la organización sea de propiedad directa comunal o de propiedad indirecta comunal; y cuyas relaciones de trabajo se basan en la igualdad de derechos y deberes, sin ningún tipo de discriminación ni de posición jerarquía.
15. **Propiedad social:** El derecho que tiene la sociedad de poseer medios y factores de producción o entidades con posibilidades de convertirse en tales, esenciales para el desarrollo de un vida plena o la producción de obras, bienes o servicios, que por condición y naturaleza propia son del dominio del Estado, bien por su condición

estratégica para la soberanía y el desarrollo humano integral nacional, o porque su aprovechamiento garantiza el bienestar general, la satisfacción de las necesidades humanas, el Desarrollo Humano Integral y el logro de la Suprema Felicidad Social.

16. Prosumidores y prosumidoras: Personas que producen, distribuyen y consumen bienes, servicios, saberes y conocimientos, mediante la participación voluntaria en los sistemas alternativos de intercambio solidario, para satisfacer sus necesidades y las de otras personas de su comunidad.

17. Proyectos socioproductivos: Conjunto de actividades concretas, orientadas a lograr uno o varios objetivos para dar respuesta a las necesidades, aspiraciones y potencialidades de la comunidad o la Comuna, formulado con base a los principios del Sistema Económico Comunal en correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación y el Plan de Desarrollo Comunal.

18. Redes socioproductivas: Articulación e integración de los procesos productivos de las organizaciones socioproductivas, por áreas de producción y servicios, fundada en los principios de cooperación, solidaridad y complementariedad.

19. Reinversión social del excedente: Es el uso de los recursos remanentes provenientes de la actividad económica de las organizaciones socioproductivas, en satisfacer las necesidades colectivas de la comunidad o la comuna, y contribuir al desarrollo social integral del país.

20. Sistema de distribución y de consumo de trueque comunitario: Sistema destinado periódicamente al intercambio justo y solidario de bienes, servicios, saberes y conocimientos.

21. Trabajo colectivo: Actividad organizada, planificada y desarrollada por los y las integrantes de las distintas formas organizativas de producción de propiedad social, basada en una relación de producción no alienada, propia y auténtica, de manera participativa y protagónica.

22. Trueque comunitario directo: Modalidad de intercambio de bienes, servicios, saberes y conocimientos con valores mutuamente equivalentes, sin necesidad de un sistema de compensación o mediación.

23. Trueque comunitario indirecto: Modalidad de intercambio de bienes, servicios, saberes y conocimientos, con valores distintos que no son mutuamente equivalentes, donde se requiere de un sistema de compensación o mediación para establecer, de manera explícita, relaciones de equivalencia entre dichos valores.

CAPÍTULO II DEL ÓRGANO COORDINADOR

Órgano Coordinador

Artículo 7. El Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía comunal, es el órgano coordinador de las políticas públicas relacionadas con la promoción, formación, acompañamiento integral y financiamiento de los proyectos socioproductivos, originados del seno de las comunidades, las comunas o constituidos por entes del Poder Público, conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación, las disposiciones de esta Ley, su Reglamento, y demás normativas aplicables.

Competencias

Artículo 8. Son competencias del órgano coordinador:

1. Dictar las políticas y lineamientos en materia de economía comunal, proyectos socioproductivos, formación, financiamiento y colocación que impulsen el desarrollo, consolidación y expansión del Sistema Económico Comunal.
2. Apoyar, con recursos financieros y no financieros, retornables y no retornables, los proyectos de las organizaciones socioproductivas que se constituyan en el marco de las disposiciones de la presente Ley.
3. Velar porque los planes y proyectos de Sistema Económico Comunal se formulen en correspondencia con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, adecuados a las necesidades y potencialidades de las comunidades, de las comunas o del ámbito geográfico de los sistemas de agregación que surjan entre éstas.
4. Diseñar e implementar programas, por sí o en articulación con otros órganos y entes públicos, como del sector privado, para la formación, asistencia técnica y actualización tecnológica de las organizaciones socioproductivas.
5. Coadyuvar a la consolidación de las bases del modelo productivo socialista, como instrumento para alcanzar el desarrollo humano integral, sostenible y sustentable.
6. Dictar normas en materia de recuperación y reestructuración de las organizaciones socioproductivas previstas en la presente Ley.
7. Contribuir a la consecución de la justa distribución de la riqueza mediante el diseño, planificación y ejecución de planes, programas y proyectos tendentes al desarrollo del Sistema Económico Comunal, como instrumento para la construcción del modelo

productivo socialista, en correspondencia con los lineamientos del Sistema Nacional de Planificación.

8. Diseñar, en articulación con los órganos y entes con competencia en materia educativa y tecnológica, programas para la formación y capacitación de los integrantes o aspirantes a integrar las organizaciones socioproductivas, así como para la acreditación de saberes y conocimientos de los ciudadanos y ciudadanas de las comunidades que formen parte del Sistema Económico Comunal.

9. Hacer seguimiento, evaluación y control de las organizaciones socioproductivas con el fin de asegurar que las actividades de las mismas se correspondan con los respectivos planes, proyectos y programas de cualquiera de los sistemas de agregación comunal.

10. Formular y promover políticas de incentivo y acompañamiento integral a las organizaciones socioproductivas que se constituyan en cualquiera de los sistemas de agregación comunal.

11. Establecer las medidas necesarias para promover el acceso de las organizaciones socioproductivas a los distintos procesos de intercambio socioproductivo, nacionales e internacionales, preferentemente con países latinoamericanos y del caribe, en el ámbito de la integración comunitaria bolivariana y caribeña, para potenciar el humanismo y la hermandad entre los pueblos.

12. Cualquier otra que se le atribuya en la presente Ley.

CAPÍTULO III DE LAS ORGANIZACIONES SOCIOPRODUCTIVAS

SECCIÓN I DISPOSICIONES GENERALES

Organizaciones socioproductivas

Artículo 9. Las organizaciones socioproductivas son unidades de producción constituidas por las instancias del Poder Popular, el Poder Público o por acuerdo entre ambos, con objetivos e intereses comunes, orientadas a la satisfacción de necesidades colectivas, mediante una economía basada en la producción, transformación, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos, en las cuales el trabajo tiene significado propio, auténtico; sin ningún tipo de discriminación.

Formas de organización socioproductivas

Artículo 10. A los efectos de la presente Ley, son formas de organizaciones socioproductivas:

1. **Empresa de propiedad social directa comunal:** Unidad socioproductiva constituida por las instancias de Poder Popular en sus respectivos ámbitos territoriales, destinada al beneficio de los productores y productoras que la integran, de la colectividad a las que corresponden, y al desarrollo social integral del país, a través de la reinversión social de sus excedentes. La gestión y administración de las empresas de propiedad social comunal directa es ejercida directamente por la instancia del Poder Popular que la constituya.

2. **Empresa de propiedad social indirecta comunal:** Unidad socioproductiva constituida por el Poder Público en el ámbito territorial de una instancia del Poder Popular, destinadas al beneficio de sus productores y productoras, de la colectividad del ámbito territorial, y del desarrollo social integral del país, a través de la reinversión social de sus excedentes. La gestión y administración de las empresas de propiedad social indirecta corresponde al ente u órgano del Poder Público que las constituyan; sin que ello obste para que, progresivamente, la gestión y administración de estas empresas sea transferida a las instancias del Poder popular, constituyéndose así en empresas de propiedad social comunal directa.

3. **Unidad productiva familiar:** Es una organización cuyos integrantes pertenecen a un núcleo familiar que desarrolla proyectos socioproductivos dirigidos a satisfacer sus necesidades y las de la comunidad; y donde sus integrantes, bajo el principio de justicia social, tienen igualdad de derechos y deberes.

4. **Grupos de intercambio solidario:** Conjunto de prosumidoras y prosumidores organizados voluntariamente, con la finalidad de participar en alguna de las modalidades de los sistemas alternativos de intercambio solidario.

Ámbito geográfico

Artículo 11. Las organizaciones socioproductivas deberán establecer su domicilio dentro del espacio geográfico del país.

En el caso de los grupos de intercambio solidario, tendrán su domicilio en el lugar donde desarrollen las actividades socioproductivas tendentes a ofrecer y recibir bienes, servicios, saberes y conocimientos.

SECCIÓN II

DE LA CONSTITUCIÓN, INSCRIPCIÓN Y REGISTRO, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIOPRODUCTIVAS

Empresa de propiedad social directa comunal

Artículo 12. La Empresa de Propiedad Social Directa Comunal será constituida mediante Documento Constitutivo Estatutario, acompañado del respectivo proyecto socioproductivo, haciendo este último las veces de capital social de la empresa, el cual será elaborado con base en las necesidades y potencialidades de las comunidades de la instancia del Poder Popular al que corresponda, y de acuerdo al Plan de Desarrollo del correspondiente sistema de agregación comunal.

Empresa de propiedad social indirecta comunal

Artículo 13. La Empresa de Propiedad Social Indirecta Comunal será constituida mediante Documento Constitutivo Estatutario, de acuerdo a las normativas que rijan al órgano o ente público encargado de su constitución.

Unidad productiva familiar

Artículo 14. La Unidad Productiva Familiar será constituida por un grupo familiar integrado por personas relacionadas hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, mediante Documento Constitutivo Estatutario y un proyecto socioproductivo sustentado en los saberes y el conocimiento propios del grupo familiar, destinado al beneficio de sus integrantes y a satisfacer necesidades de la comunidad donde el grupo familiar tenga su domicilio.

Grupos de intercambio solidario

Artículo 15. Los Grupos de Intercambio Solidario serán constituidos mediante Acta de Asamblea de prosumidores y prosumidoras, en la cual toda persona natural o jurídica podrá pertenecer a un determinado grupo de intercambio solidario para ofrecer y recibir saberes, conocimientos, bienes y servicios, siempre y cuando cumpla con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento.

Personalidad jurídica

Artículo 16. Las organizaciones socioproductivas contempladas en la presente Ley, adquirirán personalidad jurídica una vez formalizado su registro por ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en economía comunal, atendiendo al siguiente procedimiento:

En los casos de organizaciones socioproductivas de propiedad social comunal directa:

1. Los o las responsables designadas por la instancia de agregación comunal correspondiente, presentarán por ante la dependencia dispuesta al efecto por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía comunal, la solicitud de registro, acompañada del acta constitutiva de la organización, acta de la asamblea de productores y productoras y el proyecto socioproductivo.
2. El servidor público o la servidora pública responsable recibirá los documentos que le hayan sido presentados con la solicitud y en un lapso no mayor a quince (15) días se efectuará el registro, otorgándole personalidad jurídica a todos los efectos legales.
3. Si se encontrare alguna deficiencia en la documentación presentada, el servidor público o la servidora pública, lo comunicará, a los o las solicitantes, quienes tendrán un lapso de treinta (30) días para corregirla. Subsana la falta se procederá al registro.
4. Si los interesados o interesadas no subsanan la falta en el lapso indicado, el Ministerio se abstendrá de registrar dicha organización. Contra esta decisión podrá interponerse el recurso jerárquico correspondiente de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, con lo cual queda agotada la vía administrativa. Los actos administrativos dictados por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía comunal podrán ser recurridos por ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Cuando se trate de empresas de propiedad social comunal indirecta, el funcionario autorizado o funcionaria autorizada deberá presentar ante la oficina correspondiente del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía comunal el Acta Constitutiva y los Estatutos de la organización, siendo aplicables los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo.

Obligación de Identificación del Carácter de Propiedad Social

Artículo 17. En la denominación de toda empresa de propiedad social deberá indicarse tal carácter, bien sea mediante la mención expresa de “Empresa de Propiedad Social” o abreviación mediante las siglas “EPS”.

Abstención de registro

Artículo 18. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía comunal, sólo podrá abstenerse de registrar una organización socioproductiva en los siguientes casos:

1. Cuando el proyecto socio productivo de la organización tenga por objeto finalidades distintas a las previstas por esta Ley.
2. Si no se acompañan los documentos exigidos en la presente Ley o si estos presentan alguna deficiencia u omisión.

Dependencia funcional de verificación, inscripción y registro

Artículo 19. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía comunal contará con una dependencia funcional de verificación, inscripción y registro con el fin de mantener un seguimiento y control de las organizaciones socioproductivas y de los espacios de intercambio solidario del país.

Derechos de las organizaciones socioproductivas

Artículo 20. Las organizaciones socioproductivas gozarán de los siguientes derechos:

1. Formación y capacitación integral para el trabajo productivo y técnico, en la formulación, desarrollo y financiamiento de proyectos socioproductivos sustentables por parte de los órganos y entes del Poder Público con competencia en la materia.
2. Acompañamiento integral mediante el otorgamiento de recursos financieros y no financieros, retornables y no retornables, por parte de los órganos y entes del Poder Público.
3. La transferencia de servicios, actividades y recursos, en el área de sus operaciones, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 184 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con las decisiones del Consejo Federal de Gobierno.

Exenciones a las organizaciones socioproductivas

Artículo 21. Las organizaciones socioproductivas previstas en la presente Ley estarán exentas del pago de todo tipo de tributos nacionales y derechos de registro.

Los estados y los municipios, mediante leyes estatales y ordenanzas, respectivamente, podrán establecer igualmente las exenciones contempladas en este artículo para las organizaciones socioproductivas.

Procesos de contrataciones públicas

Artículo 22. Los órganos y entes del Poder Público, en sus diferentes niveles político-territoriales, establecerán en las condiciones para los procesos de contratación de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios, medidas que favorezcan y otorguen prioridad y preferencia a las organizaciones socioproductivas establecidas en la presente Ley.

Programas de recuperación

Artículo 23. El Ejecutivo Nacional, a través del ministerio con competencia en materia de economía comunal, en caso de situaciones sobrevenidas no imputables a la organización socioproductiva, que afecte su funcionamiento o capacidad de pago, podrá aprobar y aplicar programas de recuperación o reestructuración.

Obligaciones

Artículo 24. Son obligaciones de las organizaciones socioproductivas:

1. Diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos socioproductivos, en coordinación con el Comité de Economía Comunal, el Consejo de Economía Comunal o la instancia de articulación en materia de economía comunal del sistema de agregación, según sea el caso, dirigidos a consolidar el desarrollo integral de la comunidad o las comunidades del ámbito territorial de la instancia del Poder Popular al que corresponda.
2. Promover y practicar la democracia participativa y protagónica, basada en los principios de la ética socialista, y el desarrollo de actividades socioproductivas, surgidas del seno de la comunidad o las comunidades.
3. Cumplir y hacer cumplir las decisiones emanadas del Comité de Economía Comunal, el Consejo de Economía Comunal o la instancia en materia de economía comunal del sistema de agregación, según sea el caso, en función de articular los planes y proyectos socioproductivos a los lineamientos de planificación de la instancia respectiva.
4. Fomentar, promover e implementar el desarrollo de actividades socioproductivas, políticas, culturales, ecológicas, de defensa de los derechos humanos y de las personas en situación de vulnerabilidad, de acuerdo a los principios y valores contenidos en esta Ley.
5. Rendir cuentas y ejercer la contraloría social, como actividad permanente, en el desarrollo de la gestión comunitaria o comunal.

6. Prever medidas adecuadas para promover la defensa, protección y aseguramiento del medio ambiente en condiciones óptimas en la realización de sus actividades, a los fines de minimizar el impacto ambiental de las operaciones que realicen.
7. Reinvertir socialmente los excedentes para el desarrollo de las comunidades y contribuir al desarrollo social del país, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley y a la planificación de la instancia correspondiente.
8. Dar prioridad a las personas y al trabajo como hecho social sobre el capital, con el fin de garantizar el desarrollo humano integral.
9. Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones para los integrantes de las organizaciones socioproductivas.
10. Desarrollar acciones estratégicas de enlace y coordinación para articularse en red, con otras organizaciones socioproductivas, a los fines de garantizar el desarrollo y consolidación del Sistema Económico Comunal, para elevar los niveles de eficiencia en la productividad y la cobertura de bienes y servicios en beneficio de la colectividad y el desarrollo social integral del país.
11. Incentivar la inserción socioproductiva como elemento fundamental del desarrollo social, impulsando el espíritu emprendedor solidario y la cultura del trabajo colectivo.
12. Garantizar un modelo de gestión basado en el aprendizaje permanente y regido por los principios propios de la democracia revolucionaria.
13. Hacer transparente las estructuras de costos y precios, así como participar en la creación de nuevas formas de espacios de integración, mediante el intercambio directo de bienes y servicios entre organizaciones socioproductivas y las comunidades.
14. Las demás que le sean establecidas en el Acta Constitutiva y Estatutos, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento.

SECCIÓN III

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL DE LA ORGANIZACIÓN SOCIOPRODUCTIVA

Unidades de la organización socioproductiva

Artículo 25. La organización socioproductiva estará conformada por las siguientes unidades:

1. Unidad de Administración: Conformada por tres voceros o voceras.
2. Unidad de Gestión Productiva: Conformada por tres voceros o voceras.
3. Unidad de Formación: Conformada por tres voceros o voceras.
4. Unidad de Contraloría Social: Conformada por tres voceros o voceras.

Designación

Artículo 26. Cuando la organización socioproductiva sea de Propiedad Social Comunal Directa, todos los y las integrantes de las unidades de organización serán designados o designadas por la instancia del Poder Popular a la que corresponda la organización socioproductiva, en consulta con sus integrantes. Cuando la organización socioproductiva sea de Propiedad Social Comunal Indirecta, los integrantes de la Unidad de Administración serán designados de la siguiente manera:

- a) Dos (2) representantes del órgano o ente del Poder Público que constituyó la organización, los cuales deben ejercer sus labores en igualdad de condiciones con los demás integrantes de la organización.
- b) Un (1) vocero de la asamblea de productores y productoras de la organización.

Los o las integrantes de la Unidades de Gestión Productiva, Formación y Contraloría Social serán designados o designadas por la asamblea de productores y productoras.

Funciones de la Unidad de Administración

Artículo 27. Son funciones de la Unidad de Administración las siguientes:

1. Ejercer la representación legal de la organización socioproductiva.
2. Ejercer la gestión en el ámbito de su competencia de las operaciones para el óptimo funcionamiento de la organización socioproductiva.
3. Administrar los recursos producto de los excedentes que serán destinados al Fondo de Mantenimiento Productivo.
4. Presentar semestralmente a la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas de la comunidad o al Parlamento Comunal, según corresponda, informe sobre las actividades desarrolladas y estado de cumplimiento de las metas de la organización socioproductiva; y al cierre del ejercicio fiscal, balance general, estado de ganancias y pérdidas, el flujo de caja y el plan de actividades para el ejercicio fiscal siguiente, para su aprobación.
5. Llevar los Libros obligatorios que establece la Ley, así como cualquier otro que estime necesario o conveniente la organización socioproductiva.
6. Administrar los recursos, productos, bienes y servicios que le pertenezcan a la organización socioproductiva.

7. Aprobar, suscribir contratos y convenios de diferente índole, que sean necesarios para la consecución de los fines de la organización socioproductiva, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y su reglamento, así como en los estatutos de la organización socioproductiva, previa autorización de la instancia de agregación comunal o el órgano o ente del Poder Público al que corresponda.
8. Supervisar la gestión de los integrantes de la organización socioproductiva.
9. Convocar y presidir las asambleas ordinarias y extraordinarias de la organización socioproductiva.
10. Designar y revocar apoderados judiciales y extrajudiciales.
11. Dar apertura y clausurar cuentas bancarias.
12. Comprar, vender, gravar y enajenar los bienes muebles e inmuebles de la organización socioproductiva, previo informe favorable de la Unidad de Contraloría Social y aprobación de la instancia de agregación comunal o el órgano o ente del Poder Público al que corresponda.
13. Velar porque las actividades de la organización socioproductiva se desarrollen con estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, su Reglamento, los estatutos de la organización socioproductiva, el respectivo Plan de Gestión, en correspondencia con el Plan de Desarrollo Comunal.
14. Las demás que se establezcan en el Reglamento de esta Ley.

Funciones de la Unidad de Gestión Productiva

Artículo 28. Son funciones de la Unidad de Gestión Productiva las siguientes:

1. Garantizar la planificación productiva de la organización, de acuerdo al respectivo Plan de Gestión.
2. Ejecutar el desarrollo del ciclo productivo bajo principios socialistas de equilibrio ecológico.
3. Asegurar que el manejo de la organización y sus beneficios estén en función de la satisfacción de las necesidades colectivas.
4. Ajustar el precio final para los consumidores o usuarios de los bienes o servicios provenientes de las actividades desarrolladas por la organización, en correspondencia con lo establecido por el órgano o ente público competente en materia de comercio solidario.
5. Promover formas de organización del trabajo que desarrollen una nueva cultura laboral, maximizando las posibilidades para lograr la transición hacia el Modelo Productivo Socialista.
6. Las demás que se establezcan en el Reglamento de esta Ley.

Funciones de la Unidad de Formación

Artículo 29. Son funciones de la Unidad de Formación las siguientes:

1. En articulación con el órgano coordinador, desarrollar programas para formación y capacitación ético-política y técnico-productiva para los y las integrantes de la organización socioproductiva y de la comunidad o las comunidades, así como para la acreditación de saberes y conocimientos, para suministrar las herramientas necesarias para la construcción del modelo socialista.
2. Implementar mecanismos dirigidos a intercambiar tecnología, conocimientos y saberes para obtener mayor eficacia, eficiencia y efectividad en la producción e intercambio de bienes y la prestación de servicios.
3. Generar procesos de acompañamiento social integral mediante la asesoría técnica y financiera de proyectos socio-productivos.
4. Articular redes socioproductivas como sistemas de integración entre las comunidades y la organización socioproductiva.

Funciones de la Unidad de Contraloría Social

Artículo 30. Son funciones de la Unidad de Contraloría Social las siguientes:

1. Vigilar la buena marcha de todos y cada uno de los procesos, funciones y responsabilidades de la organización socioproductiva y recomendar oportunamente a la Coordinación de Administración los ajustes y correctivos que estime necesarios.
2. Ejercer la supervisión, control, seguimiento, vigilancia y fiscalización de la ejecución de los planes y proyectos de la organización socioproductiva, así como de sus fondos internos.
3. Rendir cuenta pública mediante la presentación de un informe al cierre de cada ejercicio fiscal, ante la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas o el Parlamento Comunal, según corresponda, o en cualquier momento que la instancia respectiva lo requiera.
4. Convocar las asambleas extraordinarias de la organización socioproductiva, cuando lo estime pertinente para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Cuando las observaciones y recomendaciones de la Unidad de Contraloría Social no sean tomadas en cuenta por las demás unidades de organización, las mismas serán elevadas a la instancia de agregación comunal a la que corresponda y al órgano coordinador.

SECCIÓN IV

INTEGRANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIOPRODUCTIVAS

Requisitos

Artículo 31. Para ser integrante, productor o productora, de una organización socioproductiva se requiere:

1. Ser venezolano o venezolana, extranjero o residente, habitante y hacer vida activa en el ámbito geográfico al que pertenezca la organización, con residencia de al menos seis (6) meses, salvo en los casos de comunidades recién constituidas.
2. Ser Mayor de quince (15) años.
3. Ética socialista y compromiso con los intereses y necesidades de la comunidad.
4. No desempeñar cargos públicos de elección popular.
5. No ser integrante de otra organización socioproductiva.
6. No ser declarado penal, administrativa o civilmente responsable con ocasión de la administración de fondos de carácter público o privado, mediante sentencia definitivamente firme.
7. Tener disposición al trabajo colectivo.
8. No ser representante o apoderado de personas jurídicas o personas naturales que provean bienes o servicios destinados a la organización socioproductiva.
9. De reconocida moralidad y honorabilidad.
10. Participar en los programas de formación socialista y certificación de saberes, promovidos por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía comunal.

Derechos de los productores y productoras

Artículo 32. Son derechos de los productores y productoras de las organizaciones socioproductivas establecidas en la presente Ley:

1. Recibir una justa remuneración por el trabajo realizado, de acuerdo a la calidad y cantidad del mismo.
2. Recibir apoyo económico de su organización socioproductiva ante situaciones de contingencia, emergencia o problemas de salud, que no posean capacidad de cubrir.
3. Recibir permanentemente formación y capacitación técnica-productiva y político-ideológica, necesarias para su pleno desarrollo dentro de la organización y del Sistema Económico Comunal.

Deberes

Artículo 33. Son deberes de los integrantes de una organización socioproductiva:

1. Coadyuvar en el desarrollo del Sistema Económico Comunal, para contribuir con la transformación del modelo productivo tradicional, hacia el modelo productivo socialista.
2. Incentivar la participación y ayuda mutua entre sus compañeros y compañeras de trabajo.
3. Promover ética y la disciplina revolucionaria.
4. Rendir cuenta de su gestión cuando le sea requerido.
5. Manejar con eficacia y eficiencia los recursos de la organización, asignados por el Estado u obtenidos por cualquier otra vía.
6. Actuar conforme a los acuerdos alcanzados en asamblea, ya sea del ámbito de su sistema de agregación comunal o las ordinarias y extraordinarias de la organización productiva.
7. Promover y practicar la democracia participativa y protagónica en el desarrollo de las actividades socioproductivas.
8. Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos socioproductivos dirigidos a consolidar el desarrollo integral de la comunidad.
9. Promover la contraloría social y estar sujeto a la misma.
10. Velar por el buen uso de los activos de propiedad colectiva.

Pérdida de la condición de integrante

Artículo 34. Son causas para la pérdida de la condición de integrante de la organización socioproductiva:

1. La renuncia a su condición de integrante de la organización.
2. El cambio de residencia comprobado, fuera del ámbito geográfico al que pertenezca la organización socioproductiva.
3. Enfermedad que imposibilite ejercer sus funciones.

4. Estar sujeto a sentencia definitivamente firme, dictada por los órganos jurisdiccionales, que impida el ejercicio de sus funciones.
5. Ser designado en u cargo público de lección popular.
6. Por disolución y/o liquidación de la organización socioproductiva.
7. Por vencimiento del término de duración de la organización socioproductiva.
8. Incurrir en alguna falta grave o infracción de las establecidas en la presente Ley y las que normen las instancias del Poder Popular.
9. Contravenir las disposiciones establecidas en la Carta Fundacional de la Comuna, las Cartas Comunales, relativas a las normas de convivencia, o incurrir en alguna falta calificada como grave por esta Ley.
10. La muerte.
11. Cualquiera otra que establezcan los estatutos de la organización.

Faltas grave

Artículo 35. Los integrantes de la organización socioproductiva incurrirán en faltas graves que acarreen la pérdida de su condición, en los siguientes casos:

1. Observar mala conducta o realizar actos que se traduzcan en grave perjuicio moral o material para la organización socioproductiva.
2. El no cumplimiento de los deberes e irrespeto de los principios y valores fundamentales establecidos en la presente Ley y su Reglamento.
3. Cuando se desvíe el destino de los recursos que le hayan sido entregados para su administración, a un uso distinto al planificado y que dé origen a un hecho previsto en la Ley como punible.
4. Cuando los integrantes de la organización socioproductiva incumplan con la reinversión social del excedente en un periodo de un (1) año.
5. En todo caso, la reincorporación a la organización socioproductiva será tramitada conforme lo prevea el Reglamento de la Ley.

SECCIÓN V

DE LA AUTORÍA INTELECTUAL EN LA PRODUCCIÓN COMUNAL, SU REGISTRO Y APROVECHAMIENTO

Los saberes y el conocimiento desde la Práctica Productiva del Trabajo

Artículo 36. A los efectos del desarrollo económico y social soberano, se reconoce como conocimiento generado desde la práctica productiva de la propiedad social comunal, toda mejora tecnológica en partes, normas y procedimientos de los procesos productivos.

Propiedad Social y Autoría Intelectual

Artículo 37. Es propiedad social el conocimiento y los saberes generados desde la práctica en las organizaciones socioproductivas, bajo régimen de propiedad social comunal, reconociéndose la autoría intelectual, pero su registro compete al Estado y su aplicación siempre será en beneficio del interés general.

Incentivos al Conocimiento

Artículo 38. El Estado establecerá políticas de incentivo a la generación de conocimientos científicos y tecnológicos desde la práctica productiva de las rganizaciones del Sistema Económico Comunal.

El conocimiento generado desde la práctica productiva vinculado a la Defensa Integral de la Nación queda reservado al uso exclusivo del Estado.

SECCIÓN VI

DE LA APLICACIÓN SUPLETORIA

Aplicación supletoria

Artículo 39. En todo aquello no contemplado en esta Ley, las empresas de propiedad social comunal se regirán por las normativas sobre compañías de comercio contenidas en el Código de Comercio y el ordenamiento jurídico vigente, siempre que las mismas no contravengan el espíritu, propósito y razón de las presentes.

Procedimiento

Artículo 40. Cuando en el desarrollo de las actividades de las empresas de propiedad social hubiere que aplicar, supletoriamente, cualquier disposición contenida en norma distinta a la presente ley, se procederá con arreglo a los siguientes principios:

1. Las personas naturales y sujetos públicos o privados que formen parte de empresas de propiedad social comunal no tienen derecho o participación sobre el patrimonio de las mismas, y el reparto de excedentes económicos, si los hubiere, se hará de conformidad con lo establecido en la presente ley.

2. Las empresas de propiedad social comunal podrán realizar cualesquiera actos de comercio, pero tales actos no podrán constituir su único o exclusivo objeto empresarial, por cuanto éste debe comprender, además las actividades que resulten en un beneficio para sus productores y productoras que las conformen, la reinversión social del excedente para el desarrollo de la comunidad y contribución al desarrollo social integral del país.
3. La constitución, operación y administración de las empresas de propiedad social comunal atenderá a los principios de desarrollo endógeno, equilibrio territorial, soberanía productiva, sustitución selectiva de importaciones y a un modelo de gestión que consolide la relación de producción socialista, determinándose previamente las necesidades de la población donde se proyecte su constitución, con base al potencial local, cultura autóctona y necesidades colectivas, lo cual determinará el tipo de bienes a producir o los servicios a prestar, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y a los lineamientos del Ejecutivo Nacional por intermedio del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía comunal.
4. En caso de conclusión, disolución o liquidación de empresas de propiedad social comunal, se procederá, en cuanto sea aplicable, de acuerdo a las normativas sobre liquidación de compañías de comercio establecidas en el Código de Comercio, pero los bienes resultantes de la liquidación, si los hubiere, no podrá ser apropiados por ninguna de las personas naturales o jurídicas que conformen la empresa, sino que los mismos conservarán la condición de bienes de propiedad social comunal directa o indirecta, según corresponda a la clasificación que se les hubiere otorgado para el momento de la constitución de la empresa.
5. En caso de liquidación de empresas de propiedad social comunal indirecta, los bienes resultantes de la liquidación serán revertidos a la República o transferidos a otra empresa de propiedad social comunal indirecta, según se indique en el Decreto mediante el cual se establezca la liquidación.
6. El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá reglamentar los aspectos enumerados en el presente artículo, así como otros que, con la finalidad de regular el funcionamiento de las empresas de propiedad social comunal, ameriten de normativa administrativa.

CAPÍTULO IV

DEL SISTEMA ALTERNATIVO DE INTERCAMBIO SOLIDARIO

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

Definición

Artículo 41. El Sistema Alternativo de Intercambio Solidario, es el conjunto de actividades propias que realizan los prosumidores y las prosumidoras, dentro y fuera de su comunidad, por un período determinado, antes, durante y después del intercambio, con fines de satisfacer sus necesidades y las de las comunidades organizadas, de saberes, conocimientos, bienes y servicios, mediante una moneda comunal alternativa; y con prohibición de prácticas de carácter financiero, como el cobro de interés o comisiones.

Objetivo

Artículo 42. El Sistema Alternativo de Intercambio Solidario tiene como objetivo primordial facilitar el encuentro de prosumidores y prosumidoras de los grupos que lo conforman, para desarrollar las actividades propias del sistema, organizado en la forma prescrita en la presente Ley y su reglamento, con la finalidad de satisfacer sus necesidades y de las comunidades organizadas, propendiendo al mejoramiento de la calidad de vida del colectivo.

Principios y valores

Artículo 43. El sistema alternativo de intercambio solidario, se basa en los siguientes principios y valores:

1. La buena fe como base de las operaciones de intercambio.
2. El respeto de las tradiciones sociales y culturales.
3. La responsabilidad en la elaboración de bienes y prestación de servicios.
4. La no discriminación.
5. La coordinación de negociación armónica para el intercambio.
6. El impulso del Sistema Económico Comunal.
7. La satisfacción de necesidades del colectivo.
8. El intercambio de saberes, conocimientos, bienes y servicios de calidad.
9. La reducción de los costos de las transacciones asociadas a los participantes.
10. Otros que contribuyan al desarrollo y consolidación de relaciones sociales basadas en la solidaridad, la cooperación y la complementariedad.

Modalidades del sistema

Artículo 44. Son modalidades del sistema alternativo de intercambio solidario las siguientes:

1. El trueque comunitario directo.
2. El trueque comunitario indirecto.
3. Los demás que fueren creados y regulados por el Reglamento de la presente Ley, respetando los principios y valores aquí previstos.

SECCIÓN II

DE LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE INTERCAMBIO SOLIDARIO

Acuerdo de constitución de grupos de intercambio

Artículo 45. El acuerdo para constituir un grupo de intercambio solidario, se llevará a cabo a través de una asamblea constitutiva de prosumidores y prosumidoras, en la que se propondrá la denominación del grupo, de la moneda comunal que se utilizará, así como la especificación y organización del sistema alternativo de intercambio solidario, el cual se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento.

Funcionamiento

Artículo 46. Las normas de funcionamiento de los grupos de intercambio solidario serán establecidas en el reglamento de la presente Ley y por las normativas que mediante resoluciones dicte el órgano coordinador. Estas normas deberán adaptarse a los valores culturales y a las necesidades de las comunidades, propiciando relaciones permanentes y colectivas entre las mismas.

Funciones

Artículo 47. Los grupos de intercambio solidario tienen como función primordial facilitar las relaciones de intercambio entre los prosumidores y las prosumidoras, para lo cual deberán:

1. Estimular y fortalecer el intercambio justo de saberes, conocimientos, bienes y servicios en cualquiera de los espacios de intercambio solidario.
2. Promover la autogestión comunitaria, incentivando la creación y el desarrollo integral de los prosumidores y las prosumidoras.
3. Fomentar el desarrollo endógeno sustentable.
4. Fortalecer la identidad comunal y las relaciones comunitarias.
5. Establecer relaciones con los órganos competentes para el desarrollo de la producción de saberes, conocimientos, bienes y servicios como un medio para alcanzar la soberanía alimentaria.
6. Ejecutar todas aquellas actividades que, en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el ordenamiento legal vigente, determinen los prosumidores y las prosumidoras reunidos en asamblea.

Asamblea de prosumidores y prosumidoras

Artículo 48. La Asamblea de prosumidores y prosumidoras estará integrada por quienes voluntariamente decidan conformar el respectivo grupo de intercambio solidario, con las siguientes atribuciones:

1. Diseñar, denominar, valorar, administrar y decidir sobre cualquier aspecto relativo a la moneda comunal, con autorización del órgano coordinador y conforme a las resoluciones que dicte al efecto el Banco Central de Venezuela.
2. Coordinar las actividades de organización y funcionamiento de los diferentes espacios del intercambio solidario.
3. Las que se establezcan en el Reglamento de la presente Ley.

SECCIÓN III

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS PROSUMIDORAS Y LOS PROSUMIDORES

Derechos

Artículo 49. Son derechos de los prosumidores y las prosumidoras, los siguientes:

1. Recibir del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía comunal, información, formación, capacitación y acompañamiento integral para su efectiva participación en el sistema alternativo de intercambio solidario.
2. Participar en la constitución, gestión y toma de decisiones dentro del grupo de intercambio solidario al cual pertenezcan.
3. Recibir información oportuna e incuestionable sobre los lineamientos del grupo de intercambio solidario en el que participan.
4. Elegir y ser elegidos o elegidas para la conformación de las vocerías de los comités de trabajo del grupo de intercambio solidario.
5. Su publicación en el directorio, que a tales efectos llevará el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía comunal, para la identificación de los

grupos del sistema alternativo de intercambio solidario, junto con sus ofertas de saberes, conocimientos, bienes y servicios.

6. Los que se reconozcan por decisión de la Asamblea de prosumidores y prosumidoras, de conformidad con la constitución y las Leyes.

7. Los que se establezcan en el Reglamento de esta Ley.

Deberes

Artículo 50. Son deberes de los prosumidores y las prosumidoras, los siguientes:

1. Producir bienes o prestar servicios, saberes y conocimientos para los grupos de intercambio solidario y consumir y adquirir bienes y servicios de los otros prosumidores y prosumidoras.

2. Inscribirse ante la unidad de verificación, inscripción y registro del órgano coordinador.

3. Cumplir con las obligaciones y responsabilidades asumidas en su grupo de intercambio solidario.

4. Cumplir y hacer cumplir las decisiones emanadas de la asamblea de su grupo de intercambio solidario.

5. Pertenecer a un comité de trabajo y cumplir las tareas que le sean asignadas.

6. Los que se establezcan en el Reglamento de la presente Ley.

SECCIÓN IV

DE LOS ESPACIOS DEL SISTEMA ALTERNATIVO DE INTERCAMBIO SOLIDARIO

Espacios

Artículo 51. El Sistema Alternativo de Intercambio Solidario podrá ser desarrollado en:

1. Sistema de producción y suministro para el trueque comunitario.

2. Centros de acopio, tiendas comunitarias y proveedurías.

3. Cualquier lugar que determinen los prosumidores y las prosumidoras en el momento requerido, o en su defecto el lugar acordado por la Asamblea de prosumidores y prosumidoras.

4. Todos aquellos que a tales fines fije el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía comunal.

Sanción

Artículo 52. Quien infrinja el normal funcionamiento de los grupos de intercambio solidario, incumpla sus deberes o realice acciones que alteren o perjudiquen el sistema de intercambio solidario en detrimento de los intereses de la comunidad, será desincorporado del grupo de intercambio solidario, quedando inhabilitado para participar en otros grupos de intercambio por el lapso de un (1) año, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y administrativa a que hubiere lugar.

SECCIÓN V

DE LA MONEDA COMUNAL

Función

Artículo 53. La moneda comunal, como instrumento alternativo a la moneda de curso legal en el espacio geográfico de la República, permite y facilita el intercambio de saberes, conocimientos, bienes y servicios en los espacios del sistema de intercambio solidario, mediante la cooperación, la solidaridad y la complementariedad, en contraposición a la acumulación individual.

Competencia del Banco Central de Venezuela

Artículo 54. El Banco Central de Venezuela regulará todo lo relativo a la moneda comunal dentro del ámbito de su competencia.

Creación

Artículo 55. Cada grupo de intercambio solidario escogerá la denominación de su moneda comunal, la cual responderá a una característica ancestral, histórica, cultural, social, geográfica, ambiental, patrimonial u otra que resalte los valores, la memoria e identidad del pueblo.

La moneda comunal será administrada por los grupos de intercambio solidario, debidamente registrada y distribuida equitativamente entre los prosumidores y las prosumidoras, y sólo tendrá valor dentro del ámbito territorial de su localidad; en consecuencia, no tendrá curso legal ni circulará en fuera del ámbito geográfico del grupo de intercambio solidario.

Valor

Artículo 56. El valor de la moneda comunal será determinado por equivalencia con la moneda de curso legal en el espacio geográfico de la República, a través de la asamblea de prosumidores y prosumidoras, previa autorización del órgano coordinador, de conformidad con lo previsto en la presente Ley y las resoluciones que a tal efecto dicte el Banco Central de Venezuela.

CAPÍTULO V

DE LA GESTIÓN PRODUCTIVA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIOPRODUCTIVAS

SECCIÓN I

GESTIÓN PRODUCTIVA COMO PROCESO DE PARTICIPACIÓN POPULAR

Gestión productiva

Artículo 57. La Gestión Productiva, en el marco de las actuaciones de las organizaciones socioproductivas, es un proceso para hacer efectiva la participación popular y la planificación participativa, que responda a las necesidades colectivas y contribuya al desarrollo de las potencialidades y capacidades de las comunidades. Se concreta como una expresión del Ciclo Comunal, dirigida a la formulación, ejecución y control del Plan de Desarrollo de la instancia de agregación comunal a que corresponda.

Fases del Ciclo Comunal Productivo

Artículo 58. La gestión productiva, desarrollada a través del Ciclo Comunal Productivo, se conforma por cinco fases, las cuales se complementan e interrelacionan entre sí:

1. **Diagnóstico:** Esta fase caracteriza integralmente a las comunidades, identificando las necesidades, las aspiraciones, los recursos, las potencialidades y las relaciones sociales propias de la localidad.
2. **Plan:** Determina las acciones, programas y proyectos socioproductivos, que atendiendo al diagnóstico, tiene como finalidad el desarrollo del bienestar integral de los y las habitantes del ámbito geográfico de la instancia correspondiente del Poder Popular.
3. **Presupuesto:** Comprende la determinación de los costos y recursos financieros y no financieros con los que cuenta y requiere las comunidades, destinados a la ejecución de las políticas, programas y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo correspondiente de la instancia del Poder Popular.
4. **Ejecución:** Fase que garantiza la concreción de las políticas, programas y proyectos en espacio y tiempo establecidos en el correspondiente Plan de Desarrollo, garantizando la participación activa, consciente y solidaria de las comunidades.
5. **Contraloría social:** Es la acción permanente de prevención, vigilancia, supervisión, seguimiento, control y evaluación de las fases del ciclo productivo para la concreción del plan de desarrollo Integral del ámbito geográfico de la respectiva instancia del Poder Popular.

Las fases del Ciclo Comunal Productivo deberán estar avaladas y previamente aprobadas por la respectiva instancia del Poder Popular, en articulación con los integrantes de la organización socioproductiva.

SECCIÓN II

DE LOS RECURSOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIOPRODUCTIVAS

De los recursos financieros y no financieros

Artículo 59. Las Organizaciones Socioproductivas podrán recibir de manera directa e indirecta los siguientes recursos financieros y no financieros:

1. Los que sean transferidos por la República, los estados y los municipios, conforme a lo establecido en los artículos 184, 185, 300 y 308 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
2. Los generados en el desarrollo de su actividad productiva.
3. Los provenientes de donaciones de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico.
4. Cualquier otro generado por la actividad financiera que permita la Constitución y la Ley.

Recursos financieros

Artículo 60. Las organizaciones socioproductivas manejarán recursos financieros que son expresados en unidades monetarias, propios o asignados, orientados a desarrollar las políticas, programas y proyectos socioproductivos establecidos en el correspondiente Plan de Desarrollo. Dichos recursos se clasifican en:

1. **Recursos retornables:** Son los recursos que están destinados a ejecutar políticas, programas y proyectos de carácter socioproductivos, con alcance de desarrollo comunitario y comunal, que deben ser reintegrados al órgano o ente que lo haya otorgado, según acuerdo entre las partes.

2. Recursos no retornables: Son los recursos financieros para ejecutar políticas, programas y proyectos con alcance de desarrollo comunitario y comunal, tales como la donación, asignación, transferencia, adjudicación y cualquier otro que por su naturaleza no sean retornables, y por lo tanto no serán reintegrados al órgano o ente que los haya asignado.

Recursos no financieros

Artículo 61. Se definen como programas, proyectos, instrumentos y acciones para el adiestramiento, capacitación, asistencia tecnológica, productiva y otros, prestados por los órganos y entes del poder público a las organizaciones socioproductivas, necesarios para concretar la ejecución de las políticas, planes y proyectos que impulsen al Sistema Económico Comunal.

Las organizaciones del sector privado podrán apoyar con recursos no financieros a las organizaciones del Sistema Económico Comunal de acuerdo a los lineamientos que al respecto establezca el Ejecutivo Nacional.

Ejecución de los recursos

Artículo 62. Los recursos aprobados y transferidos a las organizaciones socioproductivas serán destinados a la ejecución de políticas, programas y proyectos socio-productivos contemplados en el correspondiente Plan de Desarrollo, y deberán ser manejados de manera eficiente y eficaz para alcanzar los fines del sistema Económico Comunal, de satisfacción de necesidades colectivas, una vida digna para los y las habitantes del ámbito geográfico al que corresponda y contribuir a la construcción del modelo productivo socialista.

Los recursos destinados a la ejecución de actividad socioproductiva de las organizaciones establecidas en la presente Ley, no podrán ser utilizados para fines distintos a los destinados inicialmente, salvo que sea debidamente aprobado por el órgano o ente que los haya otorgado, previa autorización de la correspondiente instancia del Poder Popular.

SECCIÓN III.

DE LOS FONDOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIOPRODUCTIVAS

Fondos internos de las organizaciones socioproductivas

Artículo 63. Las organizaciones socioproductivas, para facilitar el desarrollo armónico y eficiente de sus actividades y funciones, deberán constituir tres fondos internos: Fondo de Mantenimiento Productivo, Fondo de Atención a los Productores y Productoras y Fondo Comunitario para la Reinversión Social.

Fondo de Mantenimiento Productivo

Artículo 64. Fondo de Mantenimiento Productivo, destinado a garantizar el ciclo productivo y brindar una respuesta eficaz a las contingencias surgidas en el ejercicio de la actividad productiva. Será administrado por la Unidad de Administración.

Fondo de Atención a los productores y productoras

Artículo 65. Fondo de Atención a los Productores y Productoras, destinado a cubrir las necesidades imprevistas de los y las integrantes de la organización socioproductiva, tales como situaciones de contingencia, emergencia o problemas de salud, que no puedan ser cubiertas por los afectados debido a su situación socioeconómica. Este Fondo será administrado por la Unidad de Administración.

Fondo Comunitario para la Reinversión Social

Artículo 66. Fondo Comunitario para la Reinversión Social, destinado al desarrollo social comunitario, comunal y nacional, estará constituido por recursos financieros excedentes del proceso socioproductivo, que serán transferidos por las organizaciones socioproductivas a la instancia del Poder Popular que corresponda y al Ejecutivo Nacional. La administración y distribución de la inversión de los recursos de éste fondo, destinados al desarrollo comunitario y comunal, corresponderá a la respectiva instancia del Poder Popular; mientras que lo relativo al aporte para la reinversión social nacional será establecida mediante decreto del Presidente de la República.

Escala sobre el aporte para la reinversión social

Artículo 67. El órgano coordinador, atendiendo a los diferentes niveles de desarrollo de las organizaciones socioproductivas, establecerá una escala de los porcentajes mínimos correspondientes al aporte destinado a la reinversión social. Asimismo, hasta tanto se

consoliden las organizaciones socioproductivas o atendiendo a situaciones especiales, podrá exceptuarlas de efectuar el aporte relativo a la reinversión social nacional.

CAPÍTULO VI DE LOS GRUPOS VULNERABLES Y DE LOS PUEBLOS COMUNIDADES INDÍGENAS

Participación y organización

Artículo 68. Las instancias del Poder Popular y del Poder Público, en el desarrollo del Sistema Económico Comunal estimularán y apoyarán la participación de las personas con discapacidad, mujeres en situación de responsable única del hogar, adultos y adultas mayores en el diseño, planificación y ejecución de planes, programas y proyectos socioproductivos, adaptados a las necesidades de la comunidad donde habiten.

De los pueblos y Comunidades indígenas

Artículo 69. Los pueblos y comunidades indígenas, atendiendo a sus culturas, prácticas tradicionales y necesidades colectivas, podrán constituir organizaciones socioproductivas, conforme a las previsiones de la presente Ley.

CAPÍTULO VII DE LA RED DE COMERCIO JUSTO Y SUMINISTRO SOCIALISTA

Creación

Artículo 70. Se crea la Red de Comercio Justo y Suministro Socialista, integrada por las Unidades de Suministro Socialista y demás medios de distribución con que cuenta el Estado para tal fin.

Promoción del intercambio comercial nacional

Artículo 71. El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comercio promoverá, fomentará y estimulará el intercambio comercial de las organizaciones socioproductivas y la Red de Comercio Justo y Suministro Socialista.

Acceso a la Red de Comercio Justo y Suministro Socialista

Artículo 72. El Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comercio, implementará las medidas necesarias para garantizar el acceso de las organizaciones socioproductivas del Sistema de Economía Comunal a la Red de Comercio Justo y Suministro Socialista.

Promoción

Artículo 73. El órgano coordinador en articulación con los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de comunicación e información y de comercio, dispondrá los medios necesarios para la promoción y difusión de las ventajas, beneficios y virtudes de los bienes y servicios originados en el Sistema Económico Comunal.

CAPÍTULO VIII DEL INTERCAMBIO COMERCIAL INTERNACIONAL

Promoción internacional

Artículo 74. El Ejecutivo Nacional establecerá las medidas necesarias para promover el acceso de las organizaciones socioproductivas del Sistema Económico Comunal a los distintos procesos de intercambio socioproductivos nacionales e internacionales, preferentemente con países latinoamericanos y del Caribe; y muy especialmente con los países miembros de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), para potenciar el humanismo, el internacionalismo y la unión de los pueblos, bajo los principios de la solidaridad, la complementariedad y el respeto a la soberanía nacional.

Incentivo cambiario

Artículo 75. Con el objeto de promover la integración y el intercambio comercial socioproductivo comunitario, el Estado garantizará la obtención de divisas a las organizaciones socioproductivas debidamente constituidas y registradas de conformidad con la presente Ley.

CAPÍTULO IX DE LOS DELITOS Y LAS SANCIONES

Artículo 76: Las personas naturales o jurídicas que, conjunta o separadamente, sin estar debidamente autorizados, contravengan las medidas, condiciones y controles previstos en la presente ley para lograr el normal y adecuado desenvolvimiento del Sistema Económico Comunal, ya sea almacenando, distribuyendo, comercializando, usando y/o

suministrando bienes de consumo, servicios y saberes del Sistema Económico Comunal, serán penados con prisión de cuatro a seis años.

Las personas naturales o jurídicas que, conjunta o separadamente, estando debidamente autorizados para formar parte del Sistema Económico Comunal o vincularse con sus actividades, de conformidad con la presente ley, que incurran en el supuesto previsto en este artículo, serán penados con prisión de seis a ocho años.

Artículo 77: Las personas naturales o jurídicas que, conjunta o separadamente, impidan, obstaculicen o restrinjan el normal funcionamiento y resguardo, de la producción, distribución, transporte, comercialización, suministro de los bienes de consumo, servicios y saberes del Sistema Económico Comunal, serán penados con prisión de dos a cuatro años.

Igualmente, incurrirán en la pena prevista en este artículo, las personas naturales o jurídicas que, conjunta o separadamente, impidan el acceso a dichos bienes por parte de los consumidores y consumidoras.

Artículo 78: Las personas naturales o jurídicas que, conjunta o separadamente, realicen propaganda o publicidad subliminal, falsa o engañosa sobre los bienes, servicios y saberes del Sistema Económico Comunal y sus medios de producción, intercambio, distribución, comercialización y suministro, serán penados con prisión de dos a cuatro años.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. Los órganos y entes de la Administración Pública con competencia o relación con la materia objeto de la presente Ley, deberán adaptarse a sus disposiciones.

SEGUNDA. A partir de la vigencia de la presente Ley, las organizaciones socioproductivas comunitarias preexistentes, que aspiren integrar el Sistema Económico Comunal, deberán adecuarse a sus disposiciones en un lapso no mayor a ciento ochenta (180) días.

SEGUNDA. El Ejecutivo Nacional, dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la publicación de esta Ley, dictará su Reglamento.

TERCERA. Hasta tanto se dicte el Reglamento de la presente Ley, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía comunal dictará los lineamientos y elaborará los instructivos que se requieran para hacer efectiva la adecuación, inscripción y registro, para el funcionamiento de las organizaciones socioproductivas, conforme a las disposiciones de esta Ley.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA. Queda derogado el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular N° 6.130, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, así como cualquiera otra disposición que contravenga el contenido de la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL

Única: La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.